

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales

Q. 48173

L

322.2 (424/931)/170

PAI

**LA JERARQUIA ECLESIASTICA
ESPAÑOLA ANTE LA LEGISLACION
SECULARIZADORA DEL PRIMER BIENIO
DE LA SEGUNDA REPUBLICA**

DONATIVO

TOMO I



M.^a del Carmen de Frías García

Madrid, 1992

Colección Tesis Doctorales. N.º 333/92

X-53-082764-5

© M.ª del Carmen de Frias García

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía.
Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.
Ricoh 3700
Depósito Legal: M-37238-1992



La Tesis Doctoral de D. *M^a del Carmen*.....
.....*ERIAS GARCIA*.....
Titulada *La jerarquía Eclesiástica Española*.....
ante la legislación reorganizadora expedida del primer
biennio de la República
Director Dr. D. *Carlos* *CONRAL* *SACRA DOR*.....
fue leída en la Facultad de *Ciencias Políticas y Sociología*
de la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, el día *9*....
de *Mayo*..... de 19*12*...., ante el tribunal
constituido por los siguientes Profesores:
PRESIDENTE *José Giménez y Martínez de Carvajal*
VOCAL *Miguel Artalejo Gallego*
VOCAL *M^a Dolores Gómez Molleda*
VOCAL *José Luis Saiz Díaz*
SECRETARIO *M^a Luisa Rodríguez Ariza*
.....
habiendo recibido la calificación de *Apt^o*.....
..... *con laude* por unanimidad

Madrid, a 9 de Mayo de 1912
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL.

Luisa Rodríguez Ariza

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

=====

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.

LA JERARQUÍA ECLESIASTICA ESPAÑOLA ANTE LA LEGISLACION
SECULARIZADORA DEL PRIMER BIENIO DE LA SEGUNDA
REPÚBLICA

- Tesis doctoral -

Autora: ~~RA~~ del Carmen de Frías García.

Director: Carlos Corral Salvador, S.J.
Catedrático de Derecho Público y
Relaciones Iglesia y Estado.

MADRID

1991

---o0o---

INDICE GENERAL

=====

INDICE SISTEMATICO	III
SIGLAS Y ABREVIATURAS	XX
BIBLIOGRAFIA	XXI
INTRODUCCION	XXX

CAPITULO I.- LA IGLESIA ANTE LA REPUBLICA	1
CAPITULO II.- LA CONSTITUCION DE 1931	422
CAPITULO III.- LA CUESTION DE LA ENSEÑANZA	716
CAPITULO IV.- LA LEGISLACION SOBRE MATRIMONIO Y DIVORCIO	1058
CAPITULO V.- LA SECULARIZACION DE CEMENTERIOS Y LA CUESTION DE ENTERRAMIENTOS	1170
CONCLUSIONES	1460

APENDICES:

I. Apendice del Capitulo I	1477
I. I. Documentos complementarios	1647
II. Apendice del Capitulo II	1666
III. Apendice del Capitulo III	1767
IV. Apendice del Capitulo IV	1898
V. Apendice del Capitulo V	1995

APENDICES COMPLEMENTARIOS:

Nota	2
Indice de documentos	4
VI. Documentos de la jerarquia sobre las elecciones de abril de 1931	24
VII. Documentos de caracter generico de la jerarquia durante 1932	59
VIII. Documentos de caracter generico de la jerarquia durante 1933	269
IX. Apendice sobre la cuestion del presupuesto de culto y claro	352
X. Apendice sobre las ordenes y congregaciones religiosas	651

ÍNDICE SISTEMÁTICO

=====

Página

CAPÍTULO I

LA IGLESIA ANTE LA REPÚBLICA

1

=====

1. La jerarquía eclesiástica española ante el nuevo régimen.
 - 1.1. Las manifestaciones hechas por los prelados con anterioridad a la recepción de las instrucciones de la Santa Sede: las circulares de los arzobispos de Toledo y de Valencia y las recomendaciones de los obispos y arzobispos de Barcelona, Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Gerona, Huesca, Valladolid, Palencia, León, Zaragoza, Vitoria, Sevilla, Vich y Pamplona 1
 - 1.2. Las instrucciones simultáneas a las del Vaticano: arzobispos y obispos de Santiago de Compostela, Granada (vicario capitular), Córdoba, Calahorra, Zamora, Urgel, Orense, Astorga y Oviedo..... 26

Página

1.3. Las orientaciones dadas por la jerarquía una vez recibidas las instrucciones de Roma: arzobispos y obispos de Burgos, Oribuela, Madrid-Alcalá, Palencia, Valladolid, Mallorca, Avila, Salamanca Tuy, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Sevilla, Málaga y Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo)	48
2. Las exhortaciones del episcopado con motivo de las elecciones a Cortes constituyentes.	
2.1. La pastoral del cardenal Segura de 1 de mayo	75
2.2. La circular del cardenal Vidal	93
2.3. La pastoral del Dr. Goma, obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela	97
3. El documento colectivo de 9 de mayo de 1931 y la primera salida de España del primado	122
4. La exposición al presidente del gobierno provisional y la restante actuación del cardenal Segura hasta su expulsión	139
5. Las protestas contra la expulsión del primado	158

Página

6. Los incendios de iglesias y conventos y los demas atentados y profanaciones en mayo de 1931.	
6.1. La opinión de la jerarquía: arzobispos y obispos de Tarragona, Málaga, Valencia, Lugo (administrador apostólico de Mondo- ñedo), Segovia, Salamanca, Vich, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Palencia, Avila, León y Oribuela	168
6.2. La continuación de la violencia	204
7. La expulsión del Dr. Mateo Múgica Urrestarazu, obispo de Vitoria	211
8. La libertad de creencias y cultos	224
9. La actuación del cardenal Segura en el exilio.	
9.1. Las primeras pastorales	243
9.2. La carta a Alcalá Zamora	255
9.3. Las directrices al episcopado	261
9.4. Las últimas pastorales	275
9.5. El documento colectivo de 25 de julio de 1931.	
9.5.1. Los proyectos de la jerarquía y las directrices de la Santa Sede	291
9.5.2. Las iniciativas del primado	297
9.5.3. La publicación del documento	304

Página

9.6. La detención del Dr. Justo Echeguren y la agravación de la situación del cardenal Segura	306
9.7. La remoción del primado	318
9.8. Epílogo sobre Segura	336
10. Las restantes actuaciones del episcopado durante la andadura inicial de la República	348
10.1. El tratamiento de la cuestión social en 1931: obispos y arzobispos de Barcelona Valladolid, Avila, Segovia, Madrid-Alcala, Coria, Vitoria, Toledo y Oviedo	350
10.2 La jerarquía y el clero: obispos y arzobispos de Madrid-Alcalá, León, Avila, Tarazona (ad- ministrador apostólico de Tudela), Málaga, Palencia y Santiago de Compostela	382
11. La restante actuación genérica de la jerarquía en la andadura inicial de la República: obispos de Barcelona, Madrid-Alcalá y Avila	410

CAPÍTULO II

LA CONSTITUCIÓN DE 1931

422

=====

1. Las tomas de postura iniciales de la jerarquía	422
1.2. La actuación a seguir ante el anteproyecto de Constitución	426
2. Las iniciativas del episcopado anteriores a la carta del nuncio transmitiendo las instrucciones del Vaticano y a la declara- ción colectiva de 25 de julio de 1931: La circular del arzobispo de Sevilla y las de los obispos de Mallorca y Vich	434
3. El documento "colectivo" del cardenal Segura	442
4. Los mensajes de las provincias eclesíasticas a las Cortes constituyentes y el proyecto de constitución de la Comisión parlamentaria.	
4.1. El mensaje de la provincia eclesíastica de Tarragona	450
4.2. El mensaje de la provincia eclesíastica de Sevilla	473
4.3. El mensaje de la provincia eclesíastica de Burgos	479

Página

5. Las pastorales y circulares individuales sobre la nueva constitución publicadas tras el documento colectivo de 25 de julio y la recepción de las instrucciones del nuncio: obispos de Tuy, Vich, Avila, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Salamanca y Tortosa	481
6. Las exhortaciones genéricas sobre la situación de España anteriores a los debates de la cuestión religiosa en las Cortes: prelados de Coria, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Urgel, Astorga, Pamplona, Zamora, Tuy, Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Avila, Palencia, Gerona, Calahorra y La Calzada, Granada, Santiago de Compostela, Huesca y Toledo	524
7. La respuesta social.	
7.1. Los fieles católicos y el clero	558
7.2. Los "anticatólicos"	576
8. La actuación de la comisión de metropolitanos y de los sacerdotes diputados	581
9. La reacción ante la aprobación del articulado constitucional relativo a la cuestión religiosa ..	623
9.1. La inmediata respuesta del Vaticano y el mensaje de contestación del episcopado español	624

9.2. Los comentarios individuales de la jerarquía: obispos de Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Avila, Sevilla, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Pa- lencia, Toledo, Madrid-Alcala y Vich	628
9.3. La resistencia legal de los fieles contra la nueva Constitución	635
9.4. Relevantes voces seculares sobre la cuestión religiosa en la Constitución	647
9.5. La continuidad de los escritos de la jerarquía: arzobispo de Burgos y obispos de Orense, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Palencia, Córdoba, Barcelona y Málaga	655
10. El viaje de los Dres. Carreras y Vilaplana al Vaticano	681
11. La conferencia de metropolitanos de 1931	685
12. El documento enviado a Pío XI por los metropolitanos	696
13. El documento colectivo de 20 de diciembre de 1932	700

CAPÍTULO III

LA CUESTIÓN DE LA ENSEÑANZA

716

=====

1. Las normas del gobierno provisional sobre enseñanza religiosa: supresión en los centros oficiales con carácter optativo en las escuelas primarias: el decreto de 6 de mayo de 1931 y la circular del día 13.- El decreto de 21 de mayo sobre titulación de los maestros y su suspensión 717
2. Los anuncios de "escuela única" 726
3. Las manifestaciones de la jerarquía ante las nuevas disposiciones y proyectos, mayo-julio de 1931: La circular del obispo de Coria defendiendo la necesidad de la instrucción religiosa y dando normas de actuación a los sacerdotes.- La ausencia generalizada de críticas y las exhortaciones para que los fieles solicitaran la instrucción religiosa. Dos excepciones: la pastoral del obispo de Palencia denunciando la posible implantación de la escuela única y la pastoral del obispo de León 728
4. Las ulteriores actuaciones del gobierno provisional y el diseño de escuela única, gratuita y laica 748

Página

5. El contenido de los nuevos escritos de la jerarquía, julio-octubre de 1931: La condena de la escuela única y la reacción contra ella (el documento colectivo de 25 de julio; las referencias de los obispados de Palencia y Vich; el mensaje de la provincia tarraconense a las Cortes constituyentes).- La continuidad en el dictado de directrices ante la opcionalidad de la enseñanza religiosa en la escuela oficial (obispados de León, Mondoñedo, Tuy, Zaragoza y Málaga).- La alusión al tema de la coeducación en el boletín eclesiástico de la diócesis de Palencia 752

6. La cuestión de la enseñanza en la Constitución y la conferencia de metropolitanos de noviembre de 1931 775

7. Las últimas manifestaciones individuales de la jerarquía en 1931: La circular del arzobispo de Valencia exhortando a la cooperación de los fieles en la enseñanza del catecismo y el discurso del obispo de Palencia contra la escuela única 785

8. La ratificación por las Cortes de las disposiciones del gobierno provisional sobre enseñanza religiosa y el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931 794

9. Los comienzos de 1932: La circular de la Dirección General de primera enseñanza de 13 de enero dejando sin efecto la ratificación parlamentaria y declarando la total supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias 800

10. Los primeros escritos de la jerarquía en el nuevo año: las circulares de los obispos de Coria y de Tuy ignorando la nueva disposición e insistiendo en la enseñanza de la religión en las escuelas 802

11. Las reacciones contra la circular de 12 de enero: obispos de Oviedo, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Barcelona y Huesca 806

12. La organización eclesial de la enseñanza religiosa y las instrucciones y exhortaciones a sacerdotes y fieles, febrero-diciembre de 1932: obispos de Salamanca, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Avila, Vitoria, Vich, Granada, Santiago, Pamplona, Palencia, Leon, Oribuela, Madrid-Alcala, Burgos, Girona, Barcelona y Málaga.- Las pastorales de los obispos de Calahorra, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Vitoria y Oribuela.- La reforma del elenco de pecados reservados en la provincia compostelana 815

13. La conferencia de metropolitanos de noviembre de 1932 903

Página

14. Las reseñas de las actuaciones	905
15. 1933. La continuidad en las líneas de organización eclesial de la enseñanza religiosa y de exhortación a la actuación de los fieles, enero-marzo; obispados de Zamora, Santiago, Tenerife, Zaragoza, Vitoria, Orense, Urgel y Málaga	917
16. La Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas y el juicio del Vaticano sobre la actuación de la jerarquía española en la cuestión de la enseñanza religiosa, marzo-julio de 1933	950
17. El desarrollo de las normas del documento colectivo de 25 de mayo de 1933 sobre los deberes de los padres de familia, julio-octubre: obispados de Palencia, Vich, Pamplona, Orense, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Tortosa	960
18. La continuación de las pastorales exponiendo la doctrina de la Iglesia en materia de enseñanza religiosa y dictando normas de organización, agosto-noviembre: obispados de Segovia, Madrid-Alcalá, Orense, Sevilla y Palencia	982
19. La conferencia de metropolitanos de octubre de 1933	1022
20. Las reseñas de las actuaciones	1027

CAPÍTULO IV

LA LEGISLACIÓN SOBRE MATRIMONIO Y DIVORCIO 1058

=====

1. Las primeras palabras de la jerarquía, el decreto de 3 de noviembre de 1931 y el documento colectivo sobre la Constitución.
 - 1.1. Las primeras palabras de la jerarquía: el mensaje de la provincia eclesiástica tarraconense a las Cortes constituyentes.- Las pastorales de los obispos de Tui y de Vich condenando el matrimonio civil y el divorcio y la pastoral del obispo de Oviedo defendiendo el matrimonio tradicional 1058
 - 1.2. El decreto de 3 de noviembre de 1931..... 1062
 - 1.3. El documento colectivo de 20 de diciembre de 1931 1065
2. La ley del Divorcio. Las exhortaciones de los obispos de Tui, Orense y Tarazona (administrador apostólico de Tudela), condenando el matrimonio civil y el divorcio; la pastoral del arzobispo de Zaragoza 1069
 - 2.1. La pastoral del Dr. Pérez Platero, obispo de Segovia 1101

Página

3. La restante actuación de la jerarquía ante las nuevas leyes civiles sobre el matrimonio	1115
3.1. Las orientaciones a los parrocos y a los fieles de los obispos de Toledo, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Salamanca, Zamora, Avila y Madrid-Alcala.....	1118
3.2. El documento colectivo de 25 de julio de 1932 y las normas para la provincia eclesiástica tarraconense.....	1138
3.3. Las normas dictadas por los obispos de Huesca, Vitoria y León.- Las observaciones del arzobispo de Burgos y "las consultas sobre el matrimonio civil" publicadas por el boletín eclesiástico de Calahorra y La Calzada	1150
4. La conferencia de metropolitanos de noviembre de 1932	1153
5. La restante actuación de la jerarquía en la cuestión relativa a la familia durante el primer bienio de la segunda República	1162

CAPÍTULO V

LA SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA CUESTIÓN DE
 =====
 LOS ENTERRAMIENTOS 1170
 =====

1. La legislación de la Republica 1170
2. La actuación de la jerarquía eclesiástica.
 - 2.1. Las primeras manifestaciones 1185
 - 2.2. La defensa de la existencia de los cementerios católicos.
 - 2.2.1. Los escritos de los preladados: obispos y arzobispos de León, Tarragona, Tui, Sevilla, Pamplona, Calahorra, Tarazona (administrador apostólico de Tudela) y Zamora 1190
 - 2.2.2. Otros documentos eclesiásticos: archidiócesis de Toledo y diócesis de Barcelona 1232
3. La reacción contra los actos de las autoridades civiles..... 1235
 - 3.1. La demolición de las tapias de separación de los cementerios religiosos y civiles. Los pronunciamientos de los obispados y arzobispados de Orense, Barcelona, Tui, Astorga,

Salamanca, Avila, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Leon, Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Santiago de Compostela y Burgos y de las conferencias de metropolitanos.....	1237
3.2. La incautación de los cementerios parroquiales. Obispos y arzobispos de Palencia, Tuy, Santiago de Compostela, Astorga, Calaborra y La Calzada, Salamanca, Oviedo, Tarragona, Leon y Avila	1267
3.2.1. El poder civil.....	1286
3.2.2. La nunciatura y las conferencias de metropolitanos.....	1300
3.2.3. Los derechos de los fieles.....	1309
3.2.4. La reacción de la jerarquía ante el reglamento de desarrollo de la ley de cementerios. Obispos y arzobispos de Madrid-Alcalá, Palencia, Barcelona, Toledo, Orihuela, Segovia, Burgos, Leon, Tortosa, Zamora, Oviedo, Palencia, Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Barcelona, Valencia, Gerona, Sevilla, Vitoria, Tuy y las conferencias de metropolitanos.....	1313

Página

4. Los cementerios privados.- Cuestiones planteadas respecto de los de las comunidades religiosas. Obispos y arzobispos de Tuy, Astorga, Avila, Tarragona, Barcelona, Segovia, Leon, Tarazona (administrador apostolico de Tudela), Sevilla y Santiago de Compostela	1334
4.1. El poder civil	1354
5. La conduccion de los enterramientos. Obispos y arzobispos de Toledo, Tuy, Astorga, Sevilla, Burgos, Barcelona, Málaga, Calahorra y La Calzada, Segovia, Tarazona (administrador apostolico de Tudela), Santiago de Compostela y Vitoria	1363
5.1. El poder civil	1381
5.2. Las conferencias de metropolitanos	1389
6. La declaracion de enterramiento catolico. Obispos y arzobispos de Toledo, Tarragona, Tuy, Gerona, Burgos, Vich, Granada, Zaragoza, Astorga, Salamanca, Oviedo, Avila, Barcelona, Leon, Calahorra y La Calzada, Segovia, Oribuela, Madrid-Alcala, Sevilla, Tarazona (administracion apostolica de Tudela), Vitoria, Valladolid y Santiago de Compostela	1395

Página

6.1. El reglamento de 8 de abril de 1933. Obispos y arzobispos de Palencia, Toledo, Burgos, León, Segovia, Oribuela, Lugo y Mondoñedo, Tarazona (administración apostólica de Tudela, Tuy, Vitoria, Zaragoza, Zamora y Sevilla	1425
7. La cremación de cadáveres. Obispos y arzobispos de León, Toledo, Tarragona, Tuy, Calahorra y La Calzada, Tarazona (ad- ministración apostólica de Tudela), Barcelona y Segovia	1445
CONCLUSIONES	1460

SIGLAS Y ABREVIATURAS

=====

BOE: *Boletín oficial Eclesiástico.*

D. de S.: Diario de Sesiones, de las Cortes Españolas.

Església i Estat durant la segona...: Arxiu Vidal i
Barraquer. *Església i Estat durant la segona República*
Espanyola.

BIBLIOGRAFÍA

=====

- I. Boletines eclesiásticos.
- II. Prensa y revistas.
- III. Libros y artículos.

I. BOLETINES ECLESIASTICOS

(Colecciones de 1931, 1932 y 1933)

1. Sedes metropolitanas:

1. Boletín eclesiástico del arzobispado de Burgos.
2. Boletín oficial eclesiástico del arzobispado de Granada.
3. Boletín oficial del arzobispado de Santiago.
4. Boletín oficial eclesiástico del arzobispado de Sevilla.
5. Boletín oficial del arzobispado de Tarragona.
6. Boletín oficial eclesiástico del arzobispado de Toledo.
7. Boletín oficial del arzobispado de Valencia.
8. Boletín oficial eclesiástico del arzobispado de Valladolid.
9. Boletín eclesiástico oficial del arzobispado de Zaragoza.

2. Obispos:

1. Boletín eclesiástico del obispado de Astorga.
2. Boletín oficial eclesiástico de la diócesis de Ávila.
3. Boletín oficial del obispado de Barcelona.
4. Boletín oficial del obispado de Calahorra y La Calzada.
5. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Córdoba.
6. Boletín oficial de la diócesis de Coria.
7. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Gerona.
8. Boletín oficial del obispado de Huesca.
9. Boletín eclesiástico del obispado de León.

10. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Málaga.
11. Boletín del obispado de Mallorca.
12. Boletín oficial del obispado de Madrid-Alcalá.
13. Boletín eclesiástico del obispado de Mondoñedo.
14. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Orense.
15. Boletín de la diócesis de Oribuela.
16. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Oviedo.
17. Boletín eclesiástico del obispado de Palencia.
18. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Pamplona.
19. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Salamanca.
20. Boletín oficial eclesiástico de la diócesis de Segovia.
21. Boletín oficial eclesiástico de las diócesis de Tarazona y Tudela.
22. Boletín oficial del obispado de Tenerife.
23. Boletín oficial eclesiástico del obispado de Tortosa.
24. Boletín oficial del obispado de Tuy.
25. Boletín oficial del obispado de Urgel.
26. Boletín eclesiástico del obispado de Vich.
27. Boletín oficial del obispado de Vitoria.
28. Boletín eclesiástico del obispado de Zamora.

"Documental" **

-
- (*) Los cuadernos de "Documental" fueron publicados durante los años de 1932 y 1933, a fin de que el clero honorara los hitos más relevantes del periodo, tanto desde el punto de vista de producción eclesiástica como legislativa. Su elaboración se hizo por la diócesis de Tortosa y quedaba incorporado como anexo a los boletines eclesiásticos de la veintena de diócesis que llegaron a suscribirse a ellos. Tal como informaba su último número lo exiguo de esta suscripción y "la mejora que parecen ofrecer las perspectivas nacionales" hicieron suspender esta publicación.

II. PRENSA Y REVISTAS

Anuario Eclesiástico 1931, 1932, 1933.

"El Debate"

"El Sol"

III. LIBROS Y ARTÍCULOS

- ALVAREZ BOLADO, Alfonso, *Factor católico y sociedad entre las dos crisis del capitalismo: 1929-1973. Ensayo bibliográfico en "Actualidad bibliográfica", diciembre 1979, nº 32.*
- ALVAREZ BOLADO, Alfonso, *Factor católico y sociedad española entre las dos crisis del capitalismo 1929-1973. Ensayo bibliográfico (2ª Parte) en "Actualidad bibliográfica", julio-diciembre 1980, nº 32.*
- ALZAGA VILLAAMIL, Oscar, *La primera democracia cristiana en España, Barcelona, 1973.*
- ARBELOA, Victor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931), Barcelona, 1976.*
- BATLLORI, Miguel y
ARBELCA, Victor Manuel
(al cuidado de) *Arxiu Vidal i Barraquer, Església i Estat durant la segona República espanyola, 1931/1936, Publicaciones de la abadía de Montserrat, 7 tomos. Volumen I, 1971; Volumen II, 1975; Volumen III, 1977; Volumen IV, 1986.*
- BÉCARUD, Jean y
LOPEZ CAMPILLO, Evelyne, *Los intelectuales españoles durante la II República, Madrid, 1978.*
- BENAVIDES, D. *El fracaso social del catolicismo español, Arboleya Martínez, Barcelona, 1973.*
- BRENAN, Gerald, *El laberinto español (antecedentes sociales y políticos de la guerra civil), París, 1962.*

- CAMPOS GILES, José María, *El obispo del sagrario abandonado biografía del Excmo. Sr. D. Manuel González y García, obispo de Palencia y antes de Málaga, fundador de la Pía Unión de Marias de los sagrarios-calvarios, y discípulo de San Juan y del Instituto de HH. Marias Nazarenas, Palencia, 1950.*
- CAPEL, Rosa M^a, *El sufragio femenino en la 2^a República española, Universidad de Granada, 1975.*
- CARR, Raymond, *España, 1808-1939, Barcelona, 1970.*
- CASTELLS, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo, (1767-1965), Madrid, 1973.*
- COMAS, Ramón, *Isidro Goma-Francesc Vidal i Barraquer. Dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939, Salamanca, 1977.*
- CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia y Estado en la España contemporánea (1833-1985), Madrid, 1985.*
- Estudios sobre la Iglesia andaluza moderna y contemporánea, Córdoba, Instituto de Historia de Andalucía, 1980.*
- Estudios sobre la Iglesia española del XIX, Madrid, 1973.*
- Los católicos españoles ante la Segunda República, en AAVV "Iglesia Estado y Sociedad en España, 1930-1932", al cuidado de Joaquín RUIZ GIMÉNEZ, Barcelona, 1984, págs. 70-78.*
- Iglesia y Estado en la España actual, en "Historia y Vida", n.º 132, marzo 1979, págs. 77-78.*

Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica contemporáneas: La jerarquía eclesias-tica (1789-1965), Córdoba, 1976.

Sociología de una élite de poder en la España contemporánea, Madrid, 1986.

Sociología e Iglesia en la España del siglo XIX, Córdoba, 1980.

- FERNANDEZ AREAL, Manuel, *La política católica en España*, Barcelona, 1970.
- GARRIGA, Ramon, *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977.
- GÓMEZ MOLLEDA, M^a Dolores, *La Masonería en la crisis española del Siglo XX*, Madrid, 1986.
- GRANADOS, Anastasio, *El cardenal Gomá, primado de España*, Madrid, 1969.
- IRIBARREN, Jesus, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, (al cuidado de) Madrid, 1974.
- JIMÉNEZ DUQUE, Baldomero, *Espiritualidad y apostolado*, en AAVV, "Historia de la Iglesia en España", al cuidado de Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, Madrid, 1979, Volumen V: "La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975)".
- KODASVER (seudónimo) *Medio siglo de vida diocesana matritense, 1913-1963*, Madrid, 1967.
- LEZCANO, Ricardo, *El divorcio en la II República*, Madrid, 1979.
- MARTÍ, Casimiro et al., *España en AAVV, "Historia del movimiento obrero cristiano"*, al cuidado del Dr. S.H. SCHOLL, Barcelona, 1964.
- MAUFA, Miguel, *Así cayó Alfonso XIII*, Barcelona, 1960.

- MUNTANYOLA, Ramón, *Vidal i Barraquer, el cardenal de la paz*, Barcelona, 1971.
- NÚÑEZ DE ARENAS, Manuel y TUNÓN DE LARA, Manuel, *Historia del movimiento obrero español*, Barcelona, 1970.
- ORDÓÑEZ MARQUEZ, J., *La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva, 1931-1936*, Madrid, Instituto Florez Estrada, C.S.I.C., 1968.
- FRIETO, Indalecio, *Convulsiones de España*, México, 1967, tres volúmenes.
- PETSCHEN, Santiago, *Iglesia-Estado. Un cambio político, las constituyentes de 1869*, Madrid, 1975.
- RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969.
- RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, *Historia de España*, México, 1952, vol. III.
- RODRÍGUEZ AÍSA, M^a Luisa, *El cardenal Gomá y la guerra de España. Aspectos de la gestión pública del Primado, 1939-1939*, C.S.I.C., Madrid, 1981.
- SANZ DE DIEGO, Rafael M^a, *La Iglesia española ante el reto de la industrialización*, en AAVV, "Historia de la Iglesia en España", al cuidado de Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, Madrid, 1979, Volumen V: "La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975)".
- SECO SERRANO, Carlos et al., *Nuestro tiempo*, en "Introducción a la Historia de España", Madrid, 1970.
- SECO SERRANO, Carlos, *¿Era católica España en 1930?*, en AAVV, "Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982", al cuidado de Joaquín RUÍZ GIMÉNEZ, Barcelona, 1984, págs. 25-37.

- SIMON, S. *Santa Sede, en AAVV "Historia del movimiento obrero cristiano", al cuidado del Dr. S.H. SCHOLL, Barcelona, 1964.*
- TAMAMES, Ramon, *La Republica. La Era de Franco, Madrid, 1973.*
- THOMAS, Hugh, *Histoire de la guerre d'Espagne Paris, 1967.*
- TIERNO GALVAN, Enrique, *Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936), Madrid, 1968.*
(al cuidado de)
- TURON DE LARA, Manuel, *La España del siglo XX, Barcelona, 1974. Tomo II, "De la Republica a la guerra civil, 1931-1936".*
- TUSELL GÓMEZ, Javier, *Historia de la Democracia cristiana en España, Madrid, 1974, dos volúmenes.*
- VÁZQUEZ, Jesus M^a et al., *La Iglesia española contemporánea, Madrid, 1973.*
- VILAR, Pierre, *Historia de España, Paris, 1963.*

INTRODUCCIÓN

=====

Dos fueron las principales motivaciones que nos llevaron a emprender el presente trabajo. La primera iría tomando cuerpo cuando, a partir de la instauración en España del régimen democrático, el episcopado comienza a elevar su voz a fin de orientar a los fieles ante las las novedades políticas que se avecinaban y que iban a tener como consecuencia unas elecciones legislativas, la redacción, debate y aprobación de una nueva Constitución y, en fin, toda una serie de normas legales en desarrollo de sus preceptos. Hitos todos ellos ante los que la jerarquía española no dejó de pronunciarse y aún hoy lo sigue haciendo.

Las coordenadas que introducía el nuevo régimen y que iban a elevar a rango de principios y derechos fundamentales cuestiones tan relevantes para la moderna sociedad occidental como la libertad de enseñanza, la libertad de creencias y cultos, la libertad de opinión y pensamiento, el divorcio,... haciendo culminar un proceso que, tímidamente, se había iniciado en los años finales de la dictadura, y que, por otra parte, diseñarían un Estado que propiciaba fuentes normativas basadas en Estatutos de autonomía o introducía instituciones como el Tribunal Constitucional, nos venían a situar en un periodo que entendimos podía encerrar muchas analogías con el que vivió España en los años de inicial configuración de la segunda República y, singularmente, del tiempo en que se gestaría la Constitución de 9 de diciembre de 1931 y de la etapa en que se dictó la legislación secularizadora que desarrollaría los preceptos esenciales de la misma.

Las declaraciones y actitudes del episcopado español ante el reconocimiento de libertades que implicaba la instauración del sistema democrático y su posible influencia en amplias capas del electorado español nos llevaron a pretender esclarecer los parámetros en que se había movido la jerarquía católica ante la última situación similar vivida por España y la posible incidencia de tales parámetros en la opinión pública de la época incidencia que, pasados cinco años, iba a propiciar la escisión radical en dos bandos contendientes.

Este planteamiento inicial suponía el necesario estímulo para abordar el análisis de un periodo que, tras cuarenta años de silencio y colaboración eclesiástica en el marco de lo que se ha venido en denominar el nacional-catolicismo, nos situaba en unas coordenadas cuya similitud de principio en el plano político y aun en la crisis económica, hacían revivir un tema que veríamos de inconstatable actualidad y de indudable trascendencia, al entender que el análisis de la cuestión religiosa y de las tomas de postura de la Iglesia ante la desaparición de privilegios seculares, era una contribución necesaria para la comprensión de nuestra más reciente historia, dada la secular influencia que el hecho religioso ha tenido siempre en ella.⁽¹⁾

(1) Sobre este extremo creemos relevante recordar las palabras del profesor GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL: "El hecho de que lo religioso haya influido tanto en nuestra vida social y política se debe a dos razones fundamentales. Por una parte, la extensión de la religión católica a todos los miembros de la sociedad española. Por otra, la profundidad del sentimiento religioso, es decir, la concepción - correcta en el fondo, aunque no siempre en sus aplicaciones - de que la religión, y especialmente la cristiana, lleva consigo una visión integral del hombre y de la vida que se manifiesta necesariamente en las formas de pensar y actuar políticamente." GIMÉNEZ Y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, José, Prólogo a la obra de Santiago PETSCHEN *Iglesia-Estado. Un cambio político. Las constituyentes de 1969*, Madrid, 1975, págs. 9-10.

Un segundo motivo reforzó este primer interés y fue el de la constatación de la escasez de estudios realizados tanto sobre la materia como sobre el período que nos interesaba. No cabe duda que la segunda República española cuenta con una amplia bibliografía, tanto nacional como extranjera, y que en toda ella, en una u otra forma es tratado el problema religioso; es necesario destacar, no obstante, que muchos de los aspectos de la España político-religiosa contemporánea siguen siendo terreno virgen para el investigador por cuanto existe una notable ausencia de trabajos rigurosos sobre las distintas corrientes de opinión que, desde el punto de vista confesional, actuaron en nuestro país en el período democrático inmediatamente anterior al que hoy vivimos, siendo casi inexistentes monografías que arrojen luz sobre la realidad del pensamiento político católico de tal período inmediato. Tal escasez es singularmente notoria en el ámbito estrictamente religioso donde no comienza a profundizarse hasta el período 1936-1939, pero cuya falta de estudio se deja sentir, como han puesto de relieve M. BAILLORI y V.M. ARBELOA en los años 1931-1936, llegando a ser singularmente parca "la bibliografía que nos da fuentes primarias y fundamentales para la historia religiosa de España durante toda la segunda República." (2)

En tal sentido queremos indicar que el propósito de la presente tesis no es otro que el de intentar contribuir al análisis de una fuerza de opinión en la esfera política de uno de los momentos más ricos en experiencias públicas de

(2) BAILLORI, Miguel y ARBELOA, Victor Manuel: *E Iglesia y Estat durant la segona República Espanyola, 1931/1936*, Arxiu Vidal y Sarraguer, I, pág. XI, Barcelona, 1971.

nuestra historia inmediata: ¿En qué medida la jerarquía eclesiástica española, como grupo de presión influyó en los procesos de decisión creando un trasfondo de opinión que contribuiría a la polarización del pensamiento político durante la segunda República? ¿Fue unánime la postura del episcopado ante el advenimiento del nuevo régimen y ante la legislación que, ya desde las primeras disposiciones del Gobierno provisional, iba a intentar secularizar los comportamientos y mores del pueblo español? Esclarecer estas cuestiones es justamente lo que intenta la presente tesis con el propósito de ser una primera aproximación sobre aspectos que solo muy superficialmente han sido tenidos en cuenta hasta el presente, aproximación que, creemos, contribuirá a reconducir a sus verdaderas dimensiones la tópica opinión que hasta hoy ha enfrentado a Iglesia y República sin matización alguna, efectuando, así, una tarea pendiente de la sociología política en un campo que se encuentra prácticamente inédito.

Como ha puesto de manifiesto J.M. CASTELLS, la instauración de la segunda República "originó... la puesta en cuestión de toda la superestructura del Estado proveniente directamente de la restauración, e igualmente, el denodado intento de abrir los cauces adecuados y necesarios para el desarrollo y plena realización de la tardía revolución burguesa española. En este contexto de revolución burguesa, la República se lanza forzosa y directamente contra las dos instituciones fundamentales del anterior régimen: la Iglesia y el ejército..."⁽³⁾

(3) CASTELLS, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídic-administrativo (1767-1965)*, Madrid, 1973, págs. 377-378.

Dos sistemas utilizaría para dismantelar el poder detentado por aquella que, desde la caída del gobierno Romanones, había supuesto el apaciguamiento de la cuestión religiosa y el asentamiento de la fuerza social del estamento eclesiástico prácticamente hasta 1931; uno, el recorte de sus medios personales y materiales, bien en forma directa (extinción del Presupuesto de culto y clero y Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas), bien indirectamente (Ley sobre enajenación de objetos artísticos; Ley del Patrimonio nacional; Ley de Bases sobre la Reforma Agraria; Ley de disolución del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, y una larga serie de disposiciones menores o complementarias); otro, el dictado de un conjunto de normas tendentes a la laicización de las ideologías configuradoras del entramado social: normas relativas a la enseñanza laica, regulación del matrimonio civil y del divorcio, secularización de cementerios,... todas las cuales, si configuradas por su legislación específica, vinieron a tener su supremo respaldo normativo en la propia Constitución de 1931 y provocaron un fuerte impacto negativo en amplias capas sociales, como certeramente ha puesto de manifiesto el profesor CUENCA TORIBIO. (4)

-
- (4) "Al llegar la primavera de 1932 la sociedad española vivía ya inmersa en un clima de relativo laicismo jurídico. El ambiente de la calle era, sin embargo, muy otro, y quedaba largo tramo por recorrer antes de que las medidas del régimen llegaran a informar el comportamiento y la conducta de extensos sectores de la población. Conscientes del tardigrado ritmo de las audanzas religiosas en los países subdesarrollados, los hombres del régimen violentaron, en general sin éxito, la marcha de su tentativa transformadora. Por las connotaciones simbólicas que en un país tan dado a lo tanático como España tenía en la época, para la inhumación sacral se impuso desde el poder la declaración explícita de querer enterrarse con culto católico para que así pudiera verificarse, en lugar de lo contrario, actitud, sin duda, más adecuada a la mentalidad de la mayoría del país. La secularización de los cementerios, las imposiciones municipales sobre el toque de campanas, las prohibiciones de algunos ayuntamientos sobre la exhibición de imágenes en fachadas y edificios públicos o la retirada del Crucifijo de las escuelas levantaron igualmente

La incidencia que una y otra actuación del poder civil pudo tener dió lugar, como es natural, a una distinta graduación de la reacción eclesiástica y el adoctrinamiento cerca de los fieles: mucho más contundente y monolítica en el primero de los casos, más matizada y dispar en el segundo; de ahí que el objeto de nuestra tesis se haya centrado, precisamente, en el análisis de la postura de los distintos miembros del episcopado ante la legislación secularizadora de la República cuya finalidad primordial era la transformación y modernización de una sociedad lastrada de ideologías decimonónicas, considerando la mayor enjundia de este análisis y extrayendo, en consecuencia, de sus límites cuantas disposiciones normativas tendieran a la directa debilitación del poder e influencia de la Iglesia en España.

Los temas investigados, por tanto, tratan de la legislación citada y de la reacción eclesiástica ante ella, por cuanto esta reacción era, a su vez, configuradora de

encendidas controversias que sensibilizaron al cuerpo social, sin excepción alguna de estratos, con consecuencias no demasiado favorables para el Sistema. Así la jerarquía y la propaganda católica se cuidaron de destacar el muy escaso calado de la medida divorcista, pese al estridor con que fue orquestada por el gobierno y sus círculos allegados, quienes estimaban que su aplicación no podía demorarse a causa del clamor público que la solicitaba. El terrilismo se fue adueñando de los comportamientos colectivos y fiestas y celebraciones religiosas arraigadas desde muy antiguo en la sociedad hispana, dejaron de efectuarse por temor a algaradas y enfrentamientos, frecuentes también en el momento de llevar el Viático a algunos moribundos e igualmente en numerosas exequias. La indole misma de tales sucesos impide una medición siquiera aproximada de su eco y trascendencia: pero no cabe duda de que, en cualquier caso, la postura negativa frente a la legislación religiosa del bienio aznarista significó un factor percutiente y a menudo innecesario de las tensiones nocivas que saturaron en aquel período la convivencia nacional: hasta el extremo de convertirse, según la opinión de numerosos observadores de la época y de estudiosos posteriores, en el principal problema de la República, tan recargada de ellos, en parte por el inmovilismo del régimen a que sucedía." CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid 1985, págs. 47-48.

actitudes que habrían de incidir sobre la ideología y hábitos de un gran sector de la población española; con ello creemos contribuir, aunque sea someramente, a enriquecer el estudio de una faceta del tema relaciones Iglesia-Estado y sociedad civil, registrando una fuente de información que una historia sociológica de tales relaciones debe atender de forma preferente.

El trabajo realizado nos ha puesto de manifiesto el interés del tema descrito, toda vez que un amplio sector de estudiosos han considerado la postura eclesiástica ante la labor modernizadora de los prohombres de la segunda República en forma monolítica y, de acuerdo con lo investigado, nada hay más lejos de la realidad: Si, consciente del apoyo prestado por la Iglesia a regimenes anteriores y considerando impropia de la época la unión entre esta y el Estado y un inequívoco mal para España el exceso de bienes en el estamento eclesiástico, la República intentó modificar tal estado de cosas, su meta primordial se encaminó, sobre todo, a acabar con la preeminencia que tal estamento ejercía en la vida nacional por uno u otro sistema: enseñanza, altos cargos, asociaciones religiosas, etc., lo que dio lugar a una actuación dirigida a solventar lo que vino a llamarse "el problema religioso", y provocando así una radical incomprensión por parte de algunos sectores de la jerarquía, que ni siquiera intentaron entender a la República. Esta, a su vez, no supo aprovechar las ventajas que España tenía en materia religiosa, ni sacar fruto de ello. "Hubo, por ambas partes, muchos palos de ciego de los que todos al final llegaron a arrepentirse. La Iglesia encontró una política marcada con un claro matiz persecutorio, impropio de nuestros días, y un ambiente adverso en grupos muy numerosos. Y la República acabó lo-

grando una Iglesia hostil, dolida y ansiosa de que las cosas cambiaran lo antes posible."(*)

Esta Iglesia, no obstante, como ha quedado apuntado, no sostuvo ante el nuevo régimen una actitud uniforme: desde el moderantismo del cardenal VIDAL Y BARRAQUER, cuyo liderazgo no sería, ni mucho menos, reconocido por todos sus hermanos en el episcopado, o incluso el posibilismo propiciado por el nuncio TEDESCHINI, que daría lugar a un entendimiento entre ambos príncipes de la Iglesia en la actitud a adoptar ante los gobiernos de la República, a la que se unían los miembros más progresistas de la jerarquía, hasta el integrismo paradigmático del cardenal SEGURA, a cuya forma de actuar cabe asociar figuras como las del después primado Dr. GOMA o las del obispo de Orense Dr. CERVINO, por citar tan solo algunos ejemplos, lo cierto es que el periodo de la República inició en España un hecho tan solo repetido en nuestros días: la fractura en la común actuación hasta entonces seguida por el episcopado, propiciada por hitos tan relevantes como la expulsión del cardenal SEGURA, la quema de iglesias y conventos, la detención del Dr. ECHEGUREN, la prohibición de la enseñanza religiosa,** la instauración del divorcio y, en fin, el reconocimiento de una serie de libertades esenciales cuyo

(5) RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969, págs. 193.

(6) "...a lo largo de toda nuestra edad contemporánea - recuerda el Dr. CUENCA TORIBIO - la docente ha sido una de las tres cuestiones medulares de su articulación y desenvolvimiento. Directa o indirectamente el tema de la enseñanza ha estado en la raíz de una gran mayoría de los litigios y enfrentamientos hispanos de los siglos XIX y XX." CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Catolicismo y escuela en la España contemporánea*, en "Páginas de literatura e historia contemporáneas", Madrid, 1966, pag. 103.

análisis y la toma de postura que provocó es, precisamente, y como queda apuntado, el objeto de nuestra investigación.”

Necesario es, llegados a este punto, hacer dos puntualizaciones, una relativa al periodo examinado y otra a la fuente esencial de la documentación utilizada:

Preciso es recordar que casi todos los estudiosos aluden a la República como configurada por dos bienios más una etapa preparatoria en que el poder político estuvo detentado por el Gobierno provisional,⁽⁷⁾ por lo que, partiendo de esta premisa, hemos querido ceñir nuestra investigación a dos fechas que, sin desconocer la artificiosidad que para todo estudio histórico suponen, entendemos lo suficientemente configuradoras del periodo que centró el énfasis en la secularización de la sociedad española, y que va desde la proclamación de la República el 14 de abril de 1931 hasta la disolución de las Cortes el 9 de octubre de 1933, disolución que daría paso a unas elecciones en las que uno de los principales lemas de las

(7) Una luz complementaria sobre el por qué de estas posturas divergentes en la jerarquía podría encontrarse en la comparación de la edad, formación y procedencia social de cada prelado, para la que, con independencia de las escasísimas obras monográficas sobre ellos (que sepamos, las que en la bibliografía citamos sobre los cardenales Segura, Vidal y Gomá y sobre el obispo de Málaga, Dr. González) nos remitimos a los concisos datos que aporta el profesor CUENCA TORIBIO en su obra *Sociología de una élite de poder de España e Hispanoamérica contemporáneas. La jerarquía eclesial (1789-1965)*, Córdoba, 1976.

(8) "...la mayoría de los autores acostumbra a dividir la política de la República en dos bienios: el bienio de la República de izquierda protagonizada por la alianza azabista-socialista, y el bienio de derecha, representado por la reacción de Lerroux y su colaboración con la C.E.D.A. Antes del comienzo del primer bienio, es frecuente hablar de una etapa de espera llevada a cabo por el Gobierno provisional; y, al final, de otra de extrema izquierda de verdadera situación de conflicto, encarnada por el Gobierno del Frente Popular. El esquema es aceptable como instrumento de trabajo siempre que no queramos acompañarlo de fechas que persigan una separación tajante entre un periodo y

derechas unidas fue el de la revisión de la legislación secularizadora hasta entonces dictada. En este periodo se configurarían las distintas actitudes de la jerarquía y su distinta influencia sobre el resto de los católicos españoles que, andando el tiempo, daría lugar a reacciones tan dispares como la iniciativa de la pastoral de 1937, por la que el Dr. GOMA proclamaria el valor de lo que pasó a denominarse la "cruzada española" o la negativa del Dr. VIDAL a suscribir tal documento y su consiguiente exilio.

Respecto a la documentación utilizada, y dejando aparte el prolijo uso que hemos hecho de la valiosísima publicación del archivo del cardenal VIDAL Y BARRAQUER,⁽⁹⁾ cuyas cartas personales al Vaticano, a los miembros del Gobierno y al resto del episcopado arrojan una singular luz sobre el entramado de los documentos oficiales de la jerarquía, esta se ha ceñido, esencialmente, a dichos documentos, singularmente a las pastorales y circulares publicadas durante el periodo, que representan una fuente de estudio prácticamente inédita, al entender que lo relevante a conocer en primer lugar era, precisamente, la toma de postura que el episcopado quería que efectuara oficialmente el ciudadano católico. De ahí que el material utilizado en forma preferente hayan sido los boletines oficiales eclesiásticos de las distintas diócesis y archidiócesis.

otro. La política rebasa siempre los límites que en la historia queremos fijarle, tanto más cuanto que, a la larga, no es sino el resultado de un forcejeo cuyas raíces últimas no se nos presentan casi nunca con la simplicidad que todo esquema supone." RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969, págs. 43-45.

(9) *Església i Estat durant la segona República Espanyola, 1931/1936*, *Arxiu Vidal i Barraquer*, edición al cuidado de Miguel BATLLORI y Víctor Manuel Arbeloa, Barcelona, Vol. I, 1971; Vol. II, 1975, VOL. III, 1977, Vol. IV, 1986.

publicación cuya singular importancia para la Iglesia de la época hemos resaltado en el oportuno lugar.⁽¹⁰⁾

Los boletines examinados representan más del cincuenta por ciento de la totalidad de las diócesis y abarcan todas las provincias eclesiásticas españolas, dando lugar a una visión que creemos más que suficiente para el propósito de nuestro trabajo.

El allegar este fondo documental ha implicado en ocasiones serias dificultades por los estragos que las colecciones de periódicos eclesiásticos sufrieron durante la guerra civil. Si hemos encontrado un amplio elenco de ellas en instituciones tales como el Instituto ENRIQUE FLOREZ, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o en la Biblioteca o Hemeroteca nacionales, amén de la Hemeroteca de Madrid, y, especialmente, en la biblioteca del Seminario diocesano de Vitoria, en otras ocasiones el lograr acceder a las fuentes que pretendimos ha supuesto su recopilación en los correspondientes archivos de la Curia o los palacios episcopales o arzobispales, singularmente en los casos de la provincia valentina o en los de las provincias andaluzas, cuyas colecciones de boletines eclesiásticos están prácticamente ausentes de Madrid.

Con ello hemos conseguido una muestra que entendemos representativa tanto por su extensión como por abarcar el amplio panorama de las distintas zonas españolas en sus aspectos eclesiásticos, políticos y geográficos, y en la que se incluyen todas las sedes metropolitanas. Esta muestra será incluida, cuando la importancia del documento examinado así lo requiera, como apéndice del correspondiente capítulo.

(10) Ver la nota 159 del capítulo "La Iglesia ante la República".

El análisis empírico de la documentación descrita, base fundamental de nuestro trabajo, es, en fin, complementada con el de la prensa de la época, singularmente de los periódicos "El Debate", al que se ha prestado especial atención por su importancia objetiva para el catolicismo más progresista de la época, y "El Sol" que, dado su carácter de diario progubernamental en un principio y más tarde independiente, nos ha servido de contrapunto a la visión dada por el anterior en cuanto órgano de la Asociación Católica de Propagandistas. Ello sin descontar el recurso incidental a otras rotativos que aparecerán debidamente citados en nota a pie de página.

El tratamiento de esta documentación ha sido completado con el estudio de la bibliografía que en la parte correspondiente reseñamos y que nos ha permitido tanto tener una visión de conjunto del tema tratado como hacer especial hincapié en cuestiones específicas, cosa que hemos ido apuntando en las correspondientes notas a pie de página, en las que fundamentalmente nos hemos ceñido más que a las obras de carácter genérico, que nos aportaron la visión indicada, a los estudios que más directamente se referían al tema estudiado.

Es procedente apuntar ahora que no hemos tenido en cuenta los numerosos escritos de la jerarquía que trataron de cuestiones puramente religiosas o de espiritualidad, si bien en nota a pie de página hemos hecho alusión a alguno de ellos durante 1931. También hemos dejado al margen cualquier referencia a las relaciones de la jerarquía con el hecho autonómico, salvo concretas referencias al País Vasco o a la cuestión de la enseñanza del catecismo y predicación sagrada, tanto en lengua catalana como en euskera.

Como criterio metodológico hemos adoptado esencialmente el cronológico, por entender que era el más idóneo para el conocimiento de los distintos hechos según se fueron produciendo. No obstante, y a fin de estructurar adecuadamente los hitos esenciales de los objetivos secularizadores de la República, hemos dividido el trabajo en cinco partes, a las que corresponden sendos capítulos:

La primera, desde el 14 de abril a diciembre de 1931, que, en forma introductoria, comprende un análisis de los pronunciamientos iniciales de la jerarquía ante el advenimiento de la República y ante las cuestiones más relevantes planteadas por este, siempre y cuando no se refirieran, salvo el específico caso de la libertad de creencias y cultos, a la secularización de las costumbres sociales. En esta parte no hemos querido dejar de incluir referencias a temas que, si tangenciales, no por ello dejaron de ser relevantes, como la cuestión de las relaciones de la jerarquía con un clero a veces deseoso de ocultarse por temor al nuevo estado de cosas y otras de bajar a la arena del ruedo político, o sus posturas ante la cuestión social, incluyendo el tratamiento de hechos que se dieron en este primer año y que si ahora pueden parecer incidentales, como el cambio de nombres a plazas que llevaban los de algún santo español o traslado de monumentos de carácter religioso, no dejaron de tener su importancia pues, por una parte, dieron lugar a las consiguientes protestas de la jerarquía y a su análisis de un comportamiento que en la mayoría de los casos entendía persecutorio por parte del poder civil y, por otra, siguieron produciéndose en distintos lugares de la geografía española a lo largo de todo el bienio, de ahí que hayamos querido recoger los ejemplos más relevantes y que fueron tratados por la prensa de toda España en los inicios de la República.

Situándonos de esta forma en lo que serían los meses cruciales del tratamiento de la cuestión religiosa en las Cortes constituyentes (octubre-diciembre de 1931), abordamos en una segunda parte la postura de la jerarquía ante la gestación y debate del nuevo texto constitucional, desde que su anuncio tuvo lugar hasta que fue aprobado el famoso artículo 26.

En las restantes partes tercera, cuarta y quinta, abordamos ya el tratamiento específico de la legislación secularizadora de este primer bienio: la cuestión de la enseñanza y toda la normativa a que, antes y después de la Constitución dio lugar, la del matrimonio y divorcio y sus leyes postconstitucionales y, en fin, un tema que en la sociedad de la época tuvo su indudable relevancia como fue el de la secularización de los cementerios y la cuestión de los enterramientos. Habiendo preferido este planteamiento temático para mayor claridad expositiva, aun cuando los documentos episcopales tuvieron en muchos casos una producción cronológica simultánea,

En todos y cada uno de estos capítulos han sido analizados pormenorizadamente tanto los documentos colectivos (que, en casos, no lo fueron tanto) del episcopado como los pronunciamientos individuales de la jerarquía, de acuerdo con los boletines eclesiásticos consultados, así como la correspondencia recibida y cursada por el cardenal VIDAL -desde el exilio del primado SEGURA y hasta el nombramiento del Dr. GOMA como nuevo primado, la cabeza de la Iglesia española, sobre cuyos hombros, junto con el nuncio TEDESCHINI, recayo la más ardua labor frente al nuevo régimen- siempre y cuando el tratamiento de los distintos temas lo hacía aconsejable.

Hemos incluido para cada capítulo un amplio apéndice documental inédito a nivel bibliográfico, procedente tanto de los boletines eclesiásticos consultados como de la prensa de la época y el cual ha sido complementado en cada caso con la reproducción de la legislación que motivaba las protestas del episcopado cuando la misma no ha sido recogida en nota a pie de página.

En una síntesis final tratamos de dar una panorámica global de todas las cuestiones tratadas y fundamentalmente de la distinta postura de cada prelado ante ellas, cuestión que entendemos es una de las aportaciones esenciales de este trabajo.

Por esta razón ha sido nuestro propósito respetar al máximo las palabras pronunciadas por cada miembro de la jerarquía, al entender que es precisamente en los matices de sus frases donde cabe inferir su diferente actitud ante el régimen republicano y ante la normativa promulgada por este; de ahí que insertemos extensas citas textuales que mejor ponen de manifiesto este hecho, no sin dejar de hacer nuestro personal resumen o, en casos, comentario, ante los distintos documentos de los obispos y arzobispos. Mas queremos indicar que, pese a ello, este trabajo ha ido enfocado más a mostrar el pensamiento del episcopado que a hacer un juicio crítico sobre el, máxime cuando aun no parece que sea el momento de enjuiciar sus distintas posturas, faltando, como faltan, por investigar, por estar aun cerrados a los estudiosos, muchos fondos archivísticos de singular importancia.

Podemos concluir indicando, así, que este trabajo ha consistido esencialmente en el análisis de un material documental cuyo acopio, sistematización y tratamiento simul-

taneo, poniendo a la luz la variedad de posturas ante unos mismos hechos, ha consistido el fin esencial de esta investigación.

Frente a la afirmación de la monolítica postura de la Iglesia española ante el nuevo régimen, solo matizada por algunos estudiosos que destacan las figuras de SEGURA, VIDAL o GOMA, entendemos necesarias no solo muchas precisiones sino también el constatar que, en ocasiones, las palabras de muchos obispos fueron totalmente congruentes con las improcedentes y apresuradas demasías jurídicas de la República y, en otras, exageradas y ultramontanas, respondiendo a un estilo de pensamiento eclesiástico que parecía anclado en las coordenadas más tradicionales de la vieja patristica.

Por todo ello somos plenamente conscientes de los límites de este trabajo que no pretende ser más que una aportación que pueda ser útil a análisis posteriores, tanto del resto de los prelados que, por haber hecho esta investigación excesiva, no han sido tratados, como también de archivos históricos que puedan arrojar una mayor luz sobre lo que ahora ofrecemos.

El deseo de colaborar a esta aportación de documentos para la historia nos ha inducido a incluir finalmente cuatro apéndices complementarios en los que recogemos -en casos resumidamente, citando solo los párrafos esenciales- escritos de la jerarquía que pueden complementar el material analizado: aquellos producidos por esta ante las elecciones de abril de 1931, que darían el triunfo al nuevo régimen, por entender que su conocimiento, aunque exceda del período de nuestra investigación, complementa los en ella estudiados; los producidos ante hechos de carácter genérico de la

República y que muestran la mentalidad de la jerarquía española sobre la situación de España en 1932 y 1933 y, por último y más concretamente, aquellos relativos a las actuaciones directas del régimen contra la Iglesia (extinción del presupuesto del culto y clero y legislación sobre las órdenes y congregaciones religiosas), que, al recopilar los que eran objeto de esta tesis, hemos allegado. Todo ello con el deseo de dar, en lo posible, una visión de conjunto sobre la época que pueda ser útil a futuros estudios.

Para acabar estas palabras queremos dedicar un emocionado recuerdo a la señera figura del profesor José Antonio Maravall Casesnoves, bajo cuya dirección comenzaron a redactarse estas páginas; así como nuestro agradecimiento a los ratos que nos dedicaron los Dres. Batllori y Cuenca Toribio y las valiosas orientaciones de ambos y no menos a las del Dr. Albiñana, viejo amigo, por su estímulo para realizar esta tesis. No puede faltar aquí, obviamente, nuestro mayor reconocimiento al Dr. D. Carlos Corral Salvador, Catedrático de Derecho Público y Relaciones Iglesia y Estado por el interés mostrado, por las directrices impartidas y por las mejoras que constantemente nos ha sugerido para el perfeccionamiento de la presente tesis.

CAPITULO I

LA IGLESIA ANTE LA REPUBLICA

1. La jerarquía eclesiástica española ante el nuevo régimen.

- 1.1. Las manifestaciones hechas por los preladados con anterioridad a la recepción de las instrucciones de la Santa Sede; las circulares de los arzobispos de Toledo y de Valencia y las recomendaciones de los obispos y arzobispos de Barcelona, Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Gerona, Huesca, Valladolid, Palencia, León, Zaragoza, Vitoria, Sevilla, Vich y Pamplona.

El mismo día quince de abril, pocas horas después de ser proclamada la República, al menos dos relevantes figuras de la jerarquía católica española sintieron la necesidad de aludir al cambio de régimen. Uno de ellos, el cardenal SEGURA, arzobispo de Toledo, lo haría utilizando un sistema indirecto al recomendar a sus fieles que elevaran preces "por las necesidades de la Iglesia y de la Patria"; el otro, el Dr. MELO ALCALDE, arzobispo de Valencia, preferiría dirigirse claramente al clero de su archidiócesis para orientarle ante la nueva situación política.

Otros documentos de distintos miembros del episcopado seguirían a los de estos dos preladados antes del 24 de abril, fecha en que el nuncio TEDESCHINI, por medio de una carta enviada a toda la jerarquía eclesiástica, transmitiría las instrucciones recibidas del Vaticano, expresando el deseo de la Santa Sede de que se recomendara a los católicos el aca-

tamiento a los poderes constituidos, " y es que un número significativo de obispos, acuciados por el desconcierto de su clero y feligreses o imitando la iniciativa de aquellos pioneros, no dudaron en aludir de inmediato, por uno u otro sistema, a las nuevas circunstancias que la instauración del régimen republicano podían suponer para la situación de la Iglesia española o para la nación misma. El análisis de estos primeros escritos, nacidos de la libre pluma de cada prelado es revelador de que la jerarquía eclesiástica no tenía, ni mucho menos, ni una postura unívoca ni iguales expectativas ante el nuevo régimen. (2)

El primer ejemplo lo encontramos ya, precisamente, en los dos documentos aludidos -ambos meras circulares-, cuyo enfoque y pretensiones no puede ser más dispar. Así, el del cardenal SEGURA no deja de traslucir sus prevenciones y disconformidad ante la instauración del sistema republicano al referirse con un estilo en extremo alarmista al trascendente cambio político, calificando de "gravísimas" las circunstancias y merecedoras de tan "honda preocupación" que era preciso que los fieles hicieran rogativas "durante

(1) Sobre la evolución del pensamiento del Vaticano respecto a los gobiernos democráticos, véase ALZAGA VILLANIL, Oscar: *La primera democracia cristiana en España*, Barcelona 1973, págs. 28-32.

(2) CUENCA TORIBIO ha puesto de manifiesto como "en las mismas filas de la jerarquía se dio una confrontación de actitudes ante el sistema republicano, si bien dentro de un abanico muy reducido que incluía, como sector extremo de la modernización la posición de un llamado moderantismo a veces incluso oportunista", CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Los católicos españoles ante la Segunda República*, en AA.VV., *Iglesia, Estado y Sociedad en España, 1930-1982*, Barcelona, 1984, pág. 73. Respecto a la primera andadura del periplo republicano son de destacar, en línea con lo que acabamos de afirmar, aunque referidas ya a las fechas posteriores a la recepción de las instrucciones del nuncio, las siguientes palabras de M^{re} Dolores GÓMEZ MOLLEDA: "Por su parte, la Iglesia acataba 'oficialmente' los poderes constituidos, conociendo sugerencias de la Santa Sede, según instrucciones del Nuncio Tedeschi: a los Obispos españoles, aunque, como se ha hecho notar en la historiografía más reciente, hay que distinguir en tal acatamiento etapas y niveles distintos". GÓMEZ MOLLEDA, M^{re} Dolores *La Masonería en la crisis española del Siglo XX*, Madrid 1986, pág. 286.

todo el tiempo que las necesidades especiales perduren", pues estas especiales necesidades precisaban de la misericordia divina al figurar, como al comienzo de la circular señalaba, entre las que "han afligido a los pueblos cristianos"; era necesario, pues, "apacuar la justicia de Dios e impetrar su clemencia sobre nuestra Patria", con toda suerte de oraciones y penitencias, tal como el mismo fundador de la Iglesia exhortó ante las desgracias. A este fin dictaba el primado una serie de instrucciones sobre actos piadosos a realizar e incluía, como anexo a la circular, un "Acto de desagracias", cuyo contenido refleja el profundo tradicionalismo que informaba el pensamiento del cardenal.¹³⁾

Vivo contraste con esta postura encierra el tono del mensaje suscrito por el Dr. MELO, con palabras llenas de prudencia y sincero acatamiento al régimen constituido, en

- (13) 15 de abril de 1931, "Circular de Su Eminencia Revdma. sobre rogativas por las necesidades de la Iglesia y de la Patria", BDE de Toledo, año 37, 16 de abril de 1931, núm. 4, págs. 131-133. Se suele aludir a la pastoral de SEGURA de 1 de mayo de 1931 como la primera manifestación escrita reveladora de su actitud ante la proclamación de la República (pues verbalmente, como veremos, no dejó de expresar su parecer sobre el nuevo régimen), ignorando la primitia que supone esta circular aunque en ella, es cierto, sólo pueda entreverse la opinión del cardenal frente a las claras manifestaciones que efectuó en la referida pastoral. Que la intención del primado con este documento del día 15 era adoptar alguna medida ante la instauración del sistema democrático viene claramente expresado por él en la circular que el día 17 remitía a todos los prelados, comentándoles su iniciativa, como más adelante veremos. Por estas razones incluimos esta circular en el apéndice núm. 1 de este capítulo, así como el anexo que la acompaña, que recoge, por las paces que contiene, la relación de lo que SEGURA consideraba los peores males que afligían a España.

Una actitud similar a la del arzobispo de Toledo, aunque no manifestada públicamente, sería la mantenida por el entonces obispo de Tarazona Dr. Isidro GOMA, según se refleja en la carta que el mismo día 15 escribió al cardenal VIDAL y en la que expresa el más radical pesimismo y disconformidad con el cambio político (Ver: Arxiu Vidal i Barraquer, *Esglesia i Estat durant la segona República espanyola*, edición de M. BATLLORI y V.M. ARBELLOA, Barcelona 1971, I, pag. 19). El boletín de Toledo del 16 de abril incluía también la circular redactada por el primado el día 5 sobre el "Día de la Prensa católica", tema que era objeto de tratamiento por todos los prelados anualmente, a fin de fomentar las colectas para este fin, la difusión de lo que se entendía por "buena prensa" y las

un documento que es la primera exposición directa y pública sobre los hechos acaecidos que hemos encontrado formulada por un prelado y en el que instruya al clero sobre la "sumisión fiel a los poderes constituidos y la ... sincera

advertencias a los fieles sobre prohibiciones eclesiásticas de ciertas lecturas periódicas, en la que, desde luego, se incluía la prensa de izquierdas. Esta circular de Segura, que, respecto a lo que calificaba de "publicaciones inmorales", indicaba que nadie podía excusarse en base a que "a las autoridades toca poner remedio" y que recomendaba denunciar ante ellas o ante los tribunales de justicia cualquier hecho "para evitar la propagación de la Prensa que atente contra la Religión y las buenas costumbres", fue reproducida en algunos boletines eclesiásticos (la mayoría de ellos, no obstante, se limitaron a publicar las redactadas por sus respectivos prelados sobre el tema con motivo de su celebración periódica el 29 de junio), y si queremos aludir ahora a esta cuestión es para indicar que algunos boletines, como los de Palencia (19 de junio de 1931, núm. 13, págs. 408-411) o Avila (23 de junio de 1931, núm. 7, págs. 255-258), al dar a la luz la circular del primado en las fechas referenciadas, se cuidaron de incluir tras ella una advertencia indicando cómo el documento de SEGURA era anterior a la proclamación de la República para resaltar cómo no había relación entre él y los acontecimientos políticos. Creemos interesante destacar, por último, en relación con la prensa y aunque exceda del tema de esta tesis y deba ser objeto de tratamiento mientras que el resto de la jerarquía, sin llegar a tan concreta enumeración, no dejó de recordar las penas canónicas en que incurrieron los lectores o difusores de cierta prensa (ver como ejemplo un párrafo de la pastoral del obispo de Avila de 29 de septiembre de 1931 en la nota 104 del capítulo "La Constitución de 1931") diferenciado en el marco de los consejos generales de la jerarquía a los fieles durante el período examinado, la reiterada insistencia de la jerarquía a lo largo del bienio en denunciar la prensa anticatólica y encaminar a los creyentes a la lectura y difusión de una prensa que, en definitiva, era la de "derechas" o conservadora. El Dr. IRURITA, obispo de Barcelona llegó a redactar el 17 de noviembre de 1931 una circular relacionando los periódicos cuya lectura estaba prohibida y "bajo pecado mortal" ("Circular sobre la lectura de la Prensa", BOE de Barcelona, año 74, 21 de noviembre de 1931, núm. 21, págs. 648-651. Ver el núm. 1 del apéndice de "documentos complementarios" de este capítulo). También trataban de la prensa antirreligiosa las cartas cruzadas entre el Dr. Zacarías MARTÍNEZ, arzobispo de Santiago de Compostela, y el cardinal Vidal los días 3, 12 y 16 de diciembre de 1931 en *Església i Estat durant la segona...*, II, págs. 204-205; 260, nota I y 267 y la nota 27 de la pág. 313 de dicha obra. La Iglesia española mantenía, por su parte, la agencia Prensa Asociada para el fomento de la prensa de ideología católica (ver op. cit., I, págs. 105-106 y II, págs. 220-232; 247-248 y la referencia en la introducción de los autores en las págs. 41 y 42, para los antecedentes de esta Agencia; ALZABA VILLANIL, Oscar, *La primera democracia cristiana en España*, Barcelona, 1973, págs. 76-77 y BENAVIDES, D., *El fracaso social del catolicismo español*, Arboleya Martínez, Barcelona, 1973, págs. 33-34 y, por último, para conocer las disensiones de los propios católicos ante su prensa: FERNÁNDEZ AREAL, Manuel, *La política católica en España*, Barcelona, 1970, págs. 36 y en la citada *Església i Estat durant la segona...* el anexo 6 a la carta del cardinal VIDAL al Secretario de Estado vaticano, cardinal PACELLI, de 28 de noviembre-7 de diciembre de 1931, págs. 188-189 y nota 63).

obediencia a sus disposiciones, mientras no estuvieren en oposición manifiesta con la ley de Dios Nuestro Señor, según las directrices marcadas por la Iglesia" y que conducían a "acatar sinceramente la nueva forma de gobierno que viene a regir los destinos de nuestra Patria, respetar las autoridades constituidas o que en lo sucesivo se constituyeren, y prestar una leal cooperación a sus disposiciones, a fin de que el esfuerzo de todos vaya labrando la paz de nuestra amadísima España, y con ella la prosperidad y fomento de toda su vida nacional"; por todo lo cual encarecía a los sacerdotes a una actuación ceñida a su ministerio y exenta "de todo apasionamiento o particular afecto", al tiempo que exhortaba a la formulación de oraciones por los componentes del nuevo gobierno de la nación.⁽⁴⁾

La circular del Dr. MELO fue publicada íntegra, bajo el titular "El Arzobispo de Valencia dice al clero: es un deber acatar las nuevas formas de Gobierno", por "El Debate" el día 19 de abril, sin incluir comentario alguno, forma inequívoca de corroborar con las primeras palabras oficiales de un alto prelado de la Iglesia la postura que había defendido el periódico de Angel HERRERA en su editorial del día 15 acatando "lealmente" el primer gobierno de la República, "gran deber de respeto y dependencia [que] durará mientras las exigencias del bien común lo pidan" y que había ampliado el día 16 informando que el Vaticano miraba "sin graves aprensiones" la situación de España, tanto por el indiferentismo de la Iglesia ante las formas de gobierno

(4) 15 de abril de 1931, "Circular núm. 103. A nuestro amadísimo clero", BOE de Valencia, 15 de abril de 1931, núm. 2121, págs. 122-124. Por la ponderación del tono de esta circular y la inmediatez de su formulación la incluimos en el apéndice núm. 2.

como porque "los promotores del actual regimen republicano han hecho declaraciones de respeto hacia la Iglesia."⁽⁵⁾

La opinión mantenida por el diario católico los días 15 y 16 sería, no obstante, matizada por el editorial publicado el día anterior a la inserción de la circular del Dr. MELO y en la que se expresaba el temeroso caldo de cultivo en que, según el editorialista, se movía gran parte de la opinión católica ante el advenimiento de la República, caldo de cultivo que, como ya hemos visto en el cardenal SEGURA, daría pie a un tono muy distinto al utilizado por el arzobispo de Valencia y a un manifiesto recelo por parte de muchos de los preladados españoles.

El editorial de "El Debate" auguraba, en efecto, una política contraria a la Iglesia por parte del nuevo régimen. Y ello a pesar de que el gobierno provisional había efectuado declaraciones de respeto a la Iglesia católica; contra ellas estaban, según el periodico, otras repetidas declaraciones por parte del mismo gobierno aludiendo a la libertad de conciencia y cultos, lo cual era "poco tranquilizador para la Iglesia". Figuraban en el Gobierno hombres que, desde luego, no serían capaces de una política antirreligiosa, pero no había que olvidar que "la República proclamada en España tiene carácter izquierdista y anticie-

(5) "El Debate", 15, 16 y 19 de abril de 1931. Sobre la actitud mantenida ante la nueva república por el grupo de Angel HERRERA. Ver CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea 1833-1985*, Madrid, 1986, págs. 26 y 25 y 30-32; FERNANDEZ AREAL, Manuel *La política católica en España*, Barcelona, 1970, págs. 27-40. TUSELL destaca la presencia en "El Debate", antes de realizarse la consulta electoral, de un "indicio de monarquismo" que no existía en otros órganos de expresión, como "El Mati", defensores de los derechos de la Iglesia y del completo indiferentismo ante las formas de gobierno antes de que se hubiera producido el cambio de régimen, por contra con el periodico de Herrera. (TUSELL GOMEZ, Javier, op. cit. II, págs. 133 y 142-143).

rical" y que "hay en el Gobierno cinco calificados masones y otros en los altos cargos".⁽⁶⁾ Por ello de las próximas Cortes constituyentes podría salir, "sino una persecución violenta, una política perversa y sinuosa, una ofensiva parsimoniosa y meditada. Tal por lo menos ha de pretender una parte muy crecida de los republicanos". Ante ello el editorialista identificaba, como siempre se venía haciendo, catolicismo con conservadurismo y, así, señalaba que "no queremos perder la esperanza de que ante ese temor tan fundado surja dentro del nuevo régimen, un gran movimiento conservador que pudiera llevar a las Cortes incluso una mayoría(...)". Para ello serían necesarios sacrificios en aras del bien común, los cuales, decía, no abundaban en la derecha, que había de ver la necesidad de ir a por un plan conjunto ya que "sino tenemos que decir que tiene Roma motivos suficientes para sentir seria preocupación por el porvenir de la Iglesia española".⁽⁷⁾

Este cambio de actitud en la postura mantenida por el periódico los días 15 y 16 venía provocado sin duda por el Estatuto Jurídico del nuevo gobierno republicano que este publicó en forma de Decreto en la "Gaceta de Madrid" del día

(6) Sobre la influencia de la masonería en la vida de la Segunda República ver GÓMEZ MOLLEDA, M. Dolores, *La Masonería en la crisis española del Siglo XX*, Madrid, 1986, págs. 250-511; ARBELLOA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931)*, Barcelona, 1976, págs. 53-61 y 288, nota 36, RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel *Los grupos de presión en la Segunda República española*, 1969, págs. 53, 159-163 y 199-261; Arxiu Vidal i Barraquer, *Església i Estat durant la segona República Espanyola, 1931-1936*, edición de M. Batllori y V.M. Arbeloa, Barcelona, 1971, I, págs. 371-372, nota 6 y ORDÓÑEZ MARQUEZ, *La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva 1931-1936*, Madrid, 1968, págs. 255-485.

(7) "El Debate", 18 de abril de 1931. Estos recelosos comentarios venían a complementar un editorial del periódico del día anterior en el que se trataba de las "personas pudientes" que abandonaban el país tras proclamarse la república, señalando que era necesario quedarse en ella para defender ideas e instituciones fundamentales para el bien de España y "para que no prospere ningún designio contra los sagrados y supremos derechos de la verdad católica". ("Ni patriótico ni gallardo". "El Debate", 17 de abril de 1931).

15, Estatuto que, amén de otras puntualizaciones sobre las previsiones de actuación del ejecutivo provisional, hasta que el nuevo régimen se dotara de una constitución que controlase su actuación política, incluía específicamente en su párrafo tercero "su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas".⁽⁸⁾ A mayor abundamiento, y aunque "El Debate" no lo mencionara, había en el conjunto de normas publicadas por el gobierno los días 14 y 15 de abril otras declaraciones reveladoras de su espíritu laicizante y que en modo alguno podrían ser caras a la doctrina tradicional de la Iglesia tal como veremos reflejado en los distintos documentos publicados por la jerarquía española a lo largo del periodo que examinamos; así, el decreto que proclamaba el nombramiento de ALCALA ZAMORA como presidente declaraba, lógica y enfáticamente, que "es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es el quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad", declaración que, si asumible por la Iglesia católica en su respeto a la autoridad democrática a partir de las encíclicas de León XIII, no cabe duda que acentuaba la descripción del origen del poder en instancias puramente democráticas o... terrenales, lo cual no dejaba de ser contrario a la insistencia del catolicismo en una justificación de la autoridad civil proveniente de la misma

(8) Señala CUENCA TORIBIO, no obstante, que la coalición de las fuerzas que dieron la victoria a la República carecía de un programa vertebrador en sus relaciones con la Iglesia y que si al establecer en el Estatuto Jurídico la libertad de creencias y cultos no había otra cosa que "llevar a la práctica uno de sus postulados básicos y aglutinadores, no cabe desconocer la concesión que implicaba, en aquellos momentos, al anticlericalismo de sus bases, deseosas de un ajuste de cuentas con la Iglesia, vista como aliada natural de la monarquía derrotada". A ello añade que el programa político del Gobierno respecto a la Iglesia "se fue forjando, en buena parte, con la respuesta a motivaciones conjunturales y siempre

autoridad divina'' como los obispos PARRADO y GOMÀ tendrían especial empeño en defender, según más adelante expondremos.

Mientras estos hechos tenían lugar, el cardenal VIDAL, más pausado en su reacción que los arzobispos SEGURA o MELO, escribía el día 16 al nuncio comunicándole su intención de visitar a MACIÀ, a fin de "evitar medidas de carácter radical y contrarias a la Religión" pues "Es preferible prevenir que protestar, o enmendar un daño hecho"; a estas frases, reveladoras de la que iba a ser la actitud del arzobispo durante toda la singladura republicana, añadiría como colofón: "Conviene no perder la serenidad, ni la prudencia, ni la energía".⁽⁹⁾

Al tiempo que el cardenal VIDAL tomaba estas decisiones en pro del entendimiento y la concordia, SEGURA, iniciando su intento de ser el conductor de la jerarquía española en la recién inaugurada situación política, escribía una circular a todos los prelados (calificada de número 1 y de "Confidencial y reservada") en la que exponía como algunos de ellos le habían manifestado que esperaban instrucciones sobre medidas a adoptar con carácter general por el episcopado, "en particular respecto a la custodia y defensa

de manera sectorizada a impulsos de los diversos partidos favorables al Sistema, que, aunque encontraban en su visceral anticlericalismo un común denominador, no lograron traducirlo en acción coordinada y sistemática". CUENCA TORIBIO, José Manuel, op. cit., págs. 21-22.

(9) La "Gaceta de Madrid", de los días 15, 16 y 17 de abril publicó un total de dieciséis decretos (nombramiento del Presidente del Gobierno provisional, cese del gabinete Aznar, constitución de ministerio de la República, creación del ministerio de comunicaciones, estatuto jurídico del gobierno provisional, amnistía e indulto) por los que pasaba a plasmarse jurídicamente la transición política y se fijaban las normas de actuación a que habría de ceñirse el nuevo gobierno hasta la constitución de las nuevas Cortes. (Ver el apéndice núm. 3).

(10) *Església i Estat durant la segona...*, tomo I, pág. 20. Esta anunciada visita la haría con el obispo de Barcelona el día 18 de abril. Ibid., nota 4.

de los bienes eclesiásticos, sobre funcionamiento de los Seminarios, modo de obrar en el caso posible de suspensión de pagos de haberes al clero, provisión de prebendas eclesiásticas a tenor del Concordato, etc.". Indicaba el primado que en esos primeros momentos solo cabía adoptar en cada sitio "las medidas circunstanciales que se estimen más prudentes" y que -como ya hemos visto- él disponía en su diócesis oraciones públicas "por las necesidades de la Patria", iniciativa sobre la que apuntaba la conveniencia de que se efectuara "también en otras partes". Señalaba, además, que "por el momento" parecía no haber peligro inminente respecto a personas, bienes y derechos económicos de la Iglesia "pues no entra en los planes de la nueva situación el crearse dificultades, abordando de pronto estos delicados temas" y que esperaba que cuando se fuera aclarando la situación tal vez se recibiera alguna instrucción de la Santa Sede pudiendo celebrarse, si ella lo veía conveniente, una conferencia extraordinaria de metropolitanos. Las iras con que SEGURA concluía esta primera circular no pueden ser, por otra parte, más reveladoras de su pesimismo ante la andadura republicana y el dolor que le causaba la caída de la monarquía.⁽¹¹⁾

Las manifestaciones a las que hasta aquí nos hemos referido son reflejo de las dos actitudes en que iba a decantarse el catolicismo español, y especialmente la jerarquía eclesiástica, ante la II República; actitudes que, si no tan claramente deducibles como las que se revelan en

(11) "En las desgracias de familia se estrechan más los lazos que unen a los Hermanos, y esto creo nos debe acontecer ahora a nosotros. Indudablemente que nuestra Patria ha sufrido un rudo golpe con los sucesos de estos días, y quiera el Señor que no sean ellos en plazo más o menos largo la causa de su muerte. Claro que a nosotros, que somos Hermanos, porque somos hijos favoreridísimos de la Iglesia, nos cabe el consuelo de que esta madre nunca muere, pero no deja de ser extraordinariamente sensible al corazón humano cuanto acontece en este orden temporal de cosas". Op.cit. págs. 21-22.

los documentos aludidos de los arzobispos SEGURA o MELO, cabe ya inferir de los primeros documentos que los obispos dirigieron a sus sacerdotes o feligreses antes de recibir las instrucciones del Vaticano⁽¹²⁾ y en los que dejaron entrever su personal opinión ante el nuevo panorama político y el desarrollo del inmediato futuro.

Como hemos indicado en la nota precedente, el obispo de Barcelona, Dr. Manuel IRURITA ALMANDOZ, escribió el día 16 de abril una carta-circular que cabría calificar de "expectante" ante el porvenir y cuyo principal objeto sería alentar y confortar en la esperanza a su clero ante las nuevas circunstancias, dándole, al tiempo, concretas normas de actuación.

Cierto es que el Dr. IRURITA calificaba de "graves y críticos" aquellos momentos, pero tales calificativos, a diferencia del contexto en que se habían dado las expresiones similares de SEGURA, no respondían a que entra-

(12) Indica ARBELDA que todos los obispos, excepto el de Segovia, tras recibir las recomendaciones de la Santa Sede publicaron en sus "Boletines" circulares sobre el acatamiento a los poderes constituidos, destacando cómo algunos prelados ya habían actuado antes de la recepción de estas recomendaciones. (El Dr. PEREZ PLATERO se limitó a publicar con fecha 28 de abril una circular relativa a primeras comuniones, no haciendo referencia alguna al cambio político, BOE de 30 de abril de 1931, núm. 8, págs. 189-191). En este Boletín no llegó a publicarse siquiera la nota de la nunciatura del día 24, siendo el primer documento que aparece sobre la República la "Declaración colectiva" de 9 de mayo, aunque en esta reproducción no figurara la fecha). Como ejemplo de la actuación eclesialista cita Arbeloa la visita realizada por el cabildo catedral de Madrid al Ministro de Justicia el día 17 de abril, la circular publicada el día 26 por el Dr. IRURITA, dada la petición de orientaciones pastorales que le había formulado la Acción Católica de Barcelona y la visita de VIDAL a MACÍ del día 18 a que antes nos hemos referido, ARBELOA, Víctor Manuel *La Semana trágica de la Iglesia en España (1931)*; Barcelona, 1976, pag. 11. CUENCA TORIBIO, por su parte, recoge anécdotas relatadas respectivamente por MARTÍNEZ BARRIO y por LERROUX sobre la actitud deferente hacia las autoridades políticas por parte de los arzobispos de Sevilla y Valladolid en los primeros días de la andadura republicana, para corroborar que la colaboración entre las potestades civiles y eclesialistas fue en un principio posible y deseada "por algunas de las figuras más destacadas de ambos círculos". CUENCA TORIBIO, José Manuel, op.cit. pag. 27.

haran a su juicio una posible desgracia, sino a lo ardua que la nueva tarea iba a ser para todos, incluidos los gobernantes, y el acierto que iban a requerir para conducir un cambio que era, en definitiva, voluntad de un Dios que estaba por encima de todos los acontecimientos. Era esta "gravedad de las circunstancias" la que le obligaba a comunicarse con sus sacerdotes tanto por ser sus colaboradores como por ser los guías directos de los fieles, y lo hacía para recordarles que "es Dios el que muda los reinos", por lo que había que hacer "un acto de fe, viendo en estos acontecimientos trascendentales de nuestra historia la mano de Dios que los guía y encamina, sin duda alguna para mayores bienes". Había habido un cambio político, no lo iba a enjuiciar, pero sí quería que sus sacerdotes estuvieran por encima de lo que para algunos de ellos podría significar -como le sucediera a SEGURA- la caída de la monarquía, recordándoles cómo ellos eran "ministros de un Rey que no puede abdicar" e insistiendo en la inmutabilidad de la Iglesia a través de los siglos frente a las variaciones políticas. No obstante, quería también destacar cómo el catolicismo había de desarrollarse en la historia a través de "dificultades y persecuciones" hasta su definitiva victoria, por lo que era necesario que se revistieran de una fortaleza, que debería "crecer y robustecer, a medida que se embravezca la lucha", debiendo ser mayor su serenidad "cuanto más furiosas sean las olas..."; frases estas que no implicaban una actitud recelosa ante la posible política religiosa de la república, siendo, tan solo, la consideración de una posibilidad que había que afrontar si llegaba; por el momento, consideraba que Dios había de asistir a todos en las críticas circunstancias que vivía el país "dando a los de arriba las gracias de un buen gobierno y a los de abajo el espíritu de cristiano acatamiento, de caridad y de concordia mutua". Por todo ello, y a fin de fijar cual había de ser la actuación

concreta de sus sacerdotes, dictaría unas disposiciones llenas de tacto y prudencia:

"12. Procuren los Rds. Sres. Sacerdotes no mezclarse en contiendas políticas, al tenor de los sagrados cánones.

"22. Permanezca cada uno en su puesto, cumpliendo celosamente las funciones propias de su cargo; y, en cuanto a la predicación, eviten las alusiones directas o indirectas al estado actual de las cosas.

"32. Guarden con las Autoridades seculares todos los respetos debidos y colaboren con ellas, por los medios que les son propios, en la prosecución de sus nobles fines."

Por último, les autorizaba a hacer rogativas públicas, en la forma que estimaran conveniente, a fin de pedir "las gracias tan necesarias en los actuales momentos" para "la Patria y sus Gobernantes".⁽¹³⁾

El mismo día que el Dr. IRURITA redactaba este documento el Dr. Rafael BALANZA NAVARRO, obispo de Lugo y administrador apostólico de Mondoñedo, aprovechando el tradicional escrito que la jerarquía publicaba en estas fechas con motivo del mes de mayo, pediría escuetamente a los fieles que sus oraciones marianas lo fueran por la religión y por la patria, a fin de que "en las graves circunstancias por que atraviesa la Nación, proteja a la Iglesia y a España y les alcance del Señor los beneficios del orden y de la paz", frase en la que destacaba el prelado lo que, a su juicio, eran los valores supremos para la nación al tiempo que estimaba que la Iglesia española iba a necesitar el amparo divino en los tiempos que se inauguraban.⁽¹⁴⁾

(13) 16 de abril de 1931, "Carta Circular de su Excelencia Reverendísima al Clero de la Diócesis", BOE de Barcelona, año 74, 20 de abril de 1931, núm. 7, págs. 251-253.

(14) 16 de abril de 1931, "Sobre el Mes de María", BOE de Mondoñedo, año 74, 20 de abril de 1931, núm. 8, págs. 69-70.

Una postura equidistante de la de los Dres. IRURITA y BALANZA sería la mantenida por el Dr. José VILA MARTÍNEZ, obispo de Gerona, que, enfermo fuera de su diócesis, se preocupaba -como señalaría su gobernador eclesiástico- de cuanto interesaba al bien de la Iglesia y de sus diocesanos "y por manera particular en las circunstancias de excepcional trascendencia en que nos encontramos" y, así, le encargaría recordar a todos los fieles "que no olviden en estos momentos verdaderamente históricos que atravesamos cómo deben procurar no perder de vista la luz que irradia la doctrina del Evangelio, los deberes y ejercicio de mutua caridad, prudencia y respeto que con todos hemos de guardar", recomendaría a las religiosas que orasen "para que Dios nos proteja" y, dirigiéndose especialmente a los sacerdotes, transmitiría la circular del obispo de Barcelona que hacía suya. (15)

Más explícito sería el Dr. Mateo COLOM Y CANALS, obispo de Huesca, que se dirigiría al clero de su diócesis en una circular en la que no dejaba de traslucir la negativa impresión que le producía el cambio de régimen político. Recordaba, sí, la doctrina de la Iglesia sobre el acatamiento a los poderes constituidos, pero en unos términos que expresaban una recelosa reserva. Así, tras aludir a las palabras de León XIII sobre tal acatamiento -ya que "las vicisitudes de la vida nos han traído una forma nueva de Gobierno", pues "hoy, 'de hecho', el poder encarna en la República" -señalaría que

"... sin perjuicio de que cada cual guarde sus simpatías y preferencias por lo que crea que es mejor, nuestra actitud ha de ser la de acatamiento del Poder constituido, y de obediencia a la

(15) 17 de abril de 1931, "Gobierno eclesiástico del obispado", BOE de Gerona, año 75, 18 de abril de 1931, núm. 6, págs. 159-162.

autoridad civil en todo lo que no sea contrario a nuestra conciencia de católicos; porque cuando lo que se nos mandare fuese contrario a la ley de Dios, entonces no deberíamos olvidar aquello de que *obediens oportet Deo magis quam hominibus.*"

Y, partiendo de este acatamiento y obediencia recordaría a los sacerdotes

"... la necesidad de ceñirse, en la predicción sagrada, a lo que esta debe ser; a la exposición de la Sagrada Escritura, principalmente del Santo Evangelio, ateniéndose a las normas prácticas trazadas por los Santos Padres y por los Romanos Pontífices, sin aludir ni directa, ni indirectamente a la política; sobre todo, para emplear la frase de S.S. el papa Pío XI felizmente reinante, mientras la política no toque al altar."

Todo ello porque

"Es necesario no involucrar ni mezclar la Religión con la política. Cada una tiene su campo, y si no hay extralimitaciones pueden vivir en fecundísima armonía."

A ello añadiría que en los cultos del mes de mayo se pidiera "por las necesidades de la Iglesia y del Estado" y acababa exhortando a los sacerdotes a que confiaran en la providencia para el triunfo de la Iglesia, pero no dejando de señalar que si les tenía destinado el sacrificio habían de permanecer "firmes en la tribulación".⁽¹⁶⁾

Positiva sería, por el contrario, la postura del arzobispo de Valladolid, Dr. Remigio GANDASEGUI y GARROCHATÉGUI, que en un laconico documento expresamente redactado "por las necesidades de la Patria", manifestaría

(16) 17 de abril de 1931, "Circular", BOE de Huesca, año 80, 1 de mayo de 1931, núm. 5, págs. 353-355.

su "completa seguridad" de que el clero de su archidiócesis se atenía a la doctrina de la Iglesia en relación con los poderes constituidos y que "en cuanto a su intervención en la política, lo mismo que en lo referente al ministerio de la predicación, cumple con toda fidelidad las normas de los sagrados cánones y las prescripciones vigentes", razón por la que se veía relevado de hacer ninguna otra consideración sobre ello, limitándose a disponer una serie de actos de culto "por las necesidades de la Patria para impetrar del Cielo la paz y prosperidad de nuestra querida España".⁽¹⁷⁾

No redactaría el obispo de Palencia por estas fechas escrito expreso sobre el cambio de régimen, pero si aprovecharía su extensa pastoral sobre el concilio de Efeso para aludir en sus últimos párrafos a las "circunstancias trascendentales del actual momento", circunstancias que hacían necesario pedir por esta "Patria querida que todos llevamos en el corazón... en estos instantes tan críticos y tan graves de su historia, dando a las autoridades todas, las luces y gracias de un buen gobierno y a todos los subditos el espíritu de cristiana obediencia y acatamiento, de evangelica caridad, de respeto y concordia mutuos, de sacrificio de todo particular interés en aras del bien común, que es, después de Dios, el único legítimo soberano de los pueblos, para que dentro del orden, de la paz, de la dulce fraternidad, del trabajo honrado, del cumplimiento del deber, todos a una laboremos por la salvación y engrandecimiento de España", ya que, de acuerdo con los ejemplos que a

(17) 18 de abril de 1931, "Sobre rogativas por las necesidades de la Patria", BDE de Valladolid, año 56, 20 de abril de 1931, núm. 4, págs. 45 y 46.

continuación daba, según la historia "la Madre de Dios es la Madre de España".⁽¹⁸⁾

También positiva sería la circular del obispo de León, Dr. José ALVAREZ MIRANDA en la que señalaría que tras escribir su Carta Pastoral sobre el Mes de María había ocurrido el cambio de régimen, por lo que era preciso "pedir de un modo especial por la paz y tranquilidad; y también que Dios ilumine a los gobernantes y a los súbditos, para que todos cumplan sus respectivos deberes en bien de la mayor prosperidad de la Religión y de la Patria". Tras expresar su confianza en que el clero se ajustaría a las prescripciones canónicas en relación con los poderes constituidos, "respetando las Autoridades establecidas y prestando nuestra cooperación en todo lo que no sea contrario a la Ley de Dios o de la Santa Iglesia; procurando la unión y buena armonía, que debe existir entre las diversas Autoridades para el buen orden y mejor régimen de la sociedad", finalizaba afirmando su esperanza en "los secretos designios de la Divina Providencia" que debía inspirar a todos "santos optimismos" guiados por la fe para hacer fructuoso su ministerio "en

(18) 19 de abril de 1931, "Carta Pastoral de S.E. Rvda. El XV Centenario del Concilio de Efeso", B.O. Palencia, año 81, 24 de abril de 1931, núm. 8, págs. 225-264. Este mismo Boletín, en su espacio titulado "Crónica General" y bajo el subtítulo "El momento actual", incluía la siguiente nota:

"Hemos de ceñirnos al poco espacio de que disponemos. Aunque fuera este mayor, habríamos de abstenernos de hacer en este número comentario alguno. Cuando escribimos nuestra acostumbrada crónica lo hacemos bajo la impresión de sorpresa que en todos ha producido un cambio de régimen en nuestra amada Patria. No hemos de dejar de consignar aquí: estamos, pues, en los comienzos de un Gobierno Provisional de la República.

«Pidamos a Dios nuestro Señor que no turbe la paz y conceda la necesaria prosperidad al pueblo español, tradicionalmente católico».

bien de la Religión y de la Patria, de la paz y prosperidad..."(19)

Escueta y negativa, por recelosa, contrastando vivamente con los documentos anteriores, singularmente con el tono utilizado por el obispo de Palencia, fue la circular que para prescribir oraciones, siguiendo la línea de SEGURA, escribió el arzobispo de Zaragoza Dr. Rigoberto DOMENECH VALLS. Indicaba en ella que "las circunstancias extraordinarias" del momento exigían de los fieles, y en particular de los sacerdotes, que redoblasen sus oraciones a fin de pedir "luz, aliento y fortaleza" y solicitar la protección divina "para que libre y preserve a la Iglesia española de todo mal y perversidad, según la frase litúrgica, y nos asista y ayude en las actuales necesidades". Para ello disponía una serie de preces a fin de que se suplicara a Dios "que derrame sobre nuestra patria y sobre la Iglesia sus gracias y no nos abandone su tutela" y, a continuación y como colofón, añadía que abrigaba la seguridad de que el clero "ha de guardar a los Poderes constituidos y a las autoridades locales el respeto que merecen, manteniendo con ellos la concordia conveniente para el fomento del orden y del bien común..."(20)

(19) 20 de abril de 1931 "Circular num. 283, Prescribiendo preces y la oración solemne", BDE de León, 20 de abril de 1931, núm. 7, págs. 194-195.

(20) 21 de abril de 1931, "Circular num. 5", BDE de Zaragoza, año 70, 1 de mayo de 1931, núm. 9, pág. 173.

Muy opuesta a esta circular seria la redactada en la misma fecha por el obispo de Vitoria Dr. Mateo MUGICA, íntegramente dedicada a exhortar al acatamiento a los poderes constituidos. En ella, tras relatar cómo el día anterior había visitado personalmente al Gobernador Civil "a quien además de reiterarle Nuestros personales sentimientos de antigua y cordial afecto, ofrecimos respetuosa sumisión a los poderes constituidos...", señalaba:

"Nuestra actitud en este punto no puede ser más franca, ni más sincera. Nuestra la llamamos, cuando mejor la llamaríamos de la Iglesia nuestra Madre, que siempre ha enseñado a sus hijos, desde Jesucristo su Divino Fundador, y desde el gran apóstol de las gentes San Pablo, no por servil adulación, sino por mandamiento del Señor, a acatar y respetar toda autoridad, sin la cual no es posible subsista la sociedad civil.

"Tampoco Nuestro deseo puede ser más noble ni más levantado; el que Dios ilumine a los nuevos gobernantes para que rijan acertadamente los destinos de nuestra patria según los principios de la doctrina católica y las disposiciones de Jesucristo y de su Santa Iglesia, únicas verdaderas fuentes de sólido progreso, de orden y de concordia, de firme y duradera paz. En ello Nos tendrán siempre a su lado, como infimos pero decididos cooperadores de la ardua empresa que han de llevar a efecto.

"Nuestros amadísimos sacerdotes pedirán al Altísimo para que así sea y el pueblo fiel con ellos, en la forma que más conveniente les parezca, como Nos se lo pedimos muy de lo íntimo del alma; y a ejemplo Nuestro, procurarán mantener con las respectivas autoridades de su provincia y de su localidad estas mismas relaciones de

acatamiento respetuoso y de cordial armonía para bien de todos."⁽²¹⁾

El arzobispo de Sevilla Dr. Eustaquio ILUNDAIN ESTEBAN aprovecharía la tradicional pastoral del mes de mayo, como había hecho el obispo de Lugo, para aludir sucintamente al cambio de régimen recomendando a sus fieles oraciones por "nuestra querida Patria", en líneas que expresaban unos lógicos y serenos deseos de futuro:

"...que las almas no se pierdan; que la Iglesia de Jesucristo desempeñe con plena libertad y dignidad en el ejercicio de su divina autoridad sobre nosotros su augusta y sagrada misión; que se conserve el orden público para la prosperidad y bienestar de nuestra Nación en ambiente de moralidad y de cristiana caridad; oremos, que nuestros gobernantes sean iluminados y dirigidos rectamente de modo que tengamos una vida quieta y tranquila en el ejercicio de toda piedad y honestidad."⁽²²⁾

El mismo día en que el Dr. ILUNDAIN redactaba esta pastoral, se reunía el arzobispo de Tarragona con sus sufragáneos para celebrar conferencia episcopal y tratar en

(21) 21 de abril de 1931, "Circular núm. 99.- Deber de acatamiento a los Poderes constituidos", BOE de Vitoria, año 67, 1 de mayo de 1931, núm. 11, pag. 330. Hay que hacer notar, no obstante, que el Dr. MÚGICA se distinguía por la rigidez de sus principios y por su vinculación a la monarquía y que antes de las elecciones del 12 de abril había publicado una pastoral que fue muy discutida por la prensa (*Església i Estat durant la segona...*, I, pag. 57, nota 7).

(22) 22 de abril de 1931, BOE de Sevilla, año 74, 24 de abril de 1931, núm. 1179, págs. 161-164.

eila de la actuación a seguir ante el cambio de régimen⁽¹²³⁾. En dicha conferencia se acordó que el cardenal dirigiera, en nombre de todos los obispos de la provincia, una carta de saludo y felicitación al nuevo ministro de Justicia y, por medio de él, al presidente del Gobierno provisional así como que los obispos que no lo hubieran hecho saludaran por escrito al presidente de la Generalidad. Igualmente se convino en que los obispos habían de orientar verbalmente al clero sobre la conducta a guardar, "pero, por ahora, nada de esto se publicará en los Boletines". Por último se aprobó el hacer presente al cardenal de Toledo, en contestación a su circular, "los inconvenientes que puede traer una pronta Conferencia de metropolitanos: celos, campañas anticlericales, etc., sin dejar de apreciar las ventajas que reportaría".

Se añadían a estos acuerdos otros de carácter estrictamente religioso entre los que es de destacar el relativo a "No suprimir este año las peregrinaciones; pero tal vez no intensificar mucho la propaganda, para evitar posibles contrariedades", decisión que, en unión de la descripción referida a la conferencia de metropolitanos, no deja de ser expresiva de los temores del episcopado catalán pese a la conciliadora actitud hacia la república que acabamos de ver reseñada.⁽¹²⁴⁾

Estas decisiones, llenas de prudencia y cautela, llegaban en casos demasiado tarde pues ya hemos visto como el obispo IRURITA se había apresurado a publicar anterior-

(123) Según COMAS el cardenal VIDAL contribuyó a que los obispos de Cataluña aceptaran el nuevo régimen. COMAS, Ramón Isidro Bona - Francesc Vidal i Barraquer, *Das misiones antagónicas de la Iglesia española de 1939*, Salamanca, 1977, pág. 69.

(124) *Esquema i Estat durant la segona...*, I, págs. 22 y 23.

mente en el boletín del episcopado una circular sobre la actuación a seguir por los sacerdotes, documento que, a su vez, había hecho suyo y mandado publicar en el boletín de su diócesis el obispo de Gerona.

Lo que curiosamente destaca es que uno de los asistentes a la Conferencia, el P. Juan PERELLO Y POU, obispo de Vich, dispusiera la publicación, al día siguiente, de una circular que, si bien muy breve, no dejaba de contravenir lo acordado. Así, bajo el subtítulo "sobre acatamiento a los poderes constituidos", se limitaba a señalar:

"Es de todos conocido el cambio de régimen que se ha obrado en nuestra amada Patria España.

"Cumpliendo instrucciones recibidas de nuestros Superiores Jerárquicos, venimos en recomendar a los sacerdotes, religiosos y a los fieles de nuestra amada diócesis, que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común."⁽²⁵⁾

Es difícil dilucidar la razón de esta contravención que, a mayor abundamiento, se apoya en "instrucciones recibidas", no pareciendo plausible pensar en un error de interpretación de lo tratado en la conferencia al ser precisamente el obispo de Vich el que actuaba como Secretario y redactor, por tanto, del acta.

Nos queda por aludir, para terminar con la referencia a los documentos episcopales publicados con anterioridad a la carta-circular de la nunciatura, a la circular redactada por el obispo de Pamplona, Dr. Tomás MUÑIZ PABLOS, escrita en

(25) 23 de abril de 1931, "Circular nº 3.- Sobre acatamiento a los poderes constituidos", BGE de Vich, año 77, 30 de abril de 1931, núm. 2072, pág. 213.

fecha simultanea a la en que FEDESCHINI transmitiría las instrucciones del Vaticano; circular que, tambien dirigida exclusivamente al clero de su diócesis, como la del obispo de Barcelona, reflejara una linea de prudencia muy similar a la de aquel. No obstante, el obispo de Fampiona seria el unico que haria hincapié en la rapidez y en lo inesperado del cambio y el peligro que ello podia implicar para asumir una recta actitud, desorientando a muchos sacerdotes en todos los ordenes:

"... no solo en lo que se refiere a la cosa publica, que, sujeta a las apreciaciones particulares de cada uno, suele ofrecer tantas soluciones como individuos juzgan de ella, sino tambien en la suerte que pudiera correr nuestra fe, en el orden religioso, la paz y la tranquilidad de la Iglesia. El cambio ha sido tan brusco, que nos ha cegado, como cuando rapidamente se pasa de la luz a las tinieblas, o de las tinieblas a la luz; y tan inesperado, que los animos no han podido disponerse con la serenidad que el juicio requiere para elegir entre los diversos dictados de la prudencia; a lo cual ha de añadirse la confusión que engendran siempre las campañas alarmistas, a las que tan alicionados somos en nuestra patria."

Sin embargo añadiría que era preciso tener en cuenta que estos cambios -sobre los que pueden pensar como les plazca "porque nadie, ni la iglesia misma, puede imponernos criterio alguno determinado"- estaban sujetos a la providencia divina y, de ahí, la fe y la confianza que era preciso tener, junto a la constante oración. Por todo ello acabara haciendo las siguientes recomendaciones:

"Por ultimo, venerables hermanos, procuremos no salirnos de nuestra misión jamas; procuremos ser sacerdotes siempre, fieles discipulos del que dijo 'dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios'; respetemos a las autoridades constituidas como nos lo enseño el Apostol, como nos lo ha inculcado repetidas veces la Santa Sede; conduzcamos con todo el que ejerce alguna auto-

ricad, por infimo que sea el grado de ella, obsequiosa y dignamente, sin servilismos, que traerian el desprecio sobre nosotros, pero sin acritudes ni rebeldias, que nos habrian de colocar fuera de la ley divina antes que de la humana; y muy particularmente en el pulpito y en la catequesis, no olvidéis las instrucciones dadas en el Reglamento Diocesano para la Predicación; absteniéndonos de hacer alusiones a cuestiones políticas y extremando ahora la cautela y circunspección, porque los regimenes nuevos son siempre muy suspicaces.

«Fe, oración, respeto y prudencia: es todo lo que tiene que recomendaros vuestro Obispo en las presentes circunstancias.»

A continuación de esta Circular, y dado que aparecía publicada en el boletín eclesiástico del 1 de mayo, se transcribía la nota del nuncio TEDESCHINI sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos; ante ella figuraba la siguiente indicación: "Redactada la presente Circular se ha recibido de la Nunciatura Apostólica lo siguiente". (26) y (27)

(26) 24 de abril de 1931. "Circular. A los sacerdotes diocesanos en las presentes circunstancias". BQE de Pamplona, año 70, 1 de mayo de 1931, núm. 1709, págs. 185-188.

(27) Es interesante destacar cómo durante este período inicial de indefinición de lo que en un futuro serían las relaciones entre las potestades civiles y eclesiásticas, relevantes voces del país expresaron públicamente su parecer en pro de un fructífero entendimiento; así el 21 de abril la "Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos", publicó en la prensa un escrito que, encabezado por la firma de Angel OSSORIO, alababa la forma en que las relaciones entre Iglesia y República se iban desarrollando en estos primeros momentos, rogando a las autoridades de aquella que siguieran asistiendo al gobierno y recordando a éste que "España tiene una sensibilidad muy aguda en materia religiosa", añadiendo "en un esperanzado comentario del punto tercero del Estatuto jurídico del gobierno propio de los intelectuales seculares, más no del todo acorde con la tradicional doctrina católica, según veremos" que la nación "recibirá con respeto una política de libertad perfectamente defendible y justificable", más no dejándole de advertir sobre los límites en que dicha política debía encerrarse para el debido afianzamiento de la República al señalar que "...si adquiriese temor racional de que puedan ser menoscabados u ofendidas creencias que integran uno de los grandes patrimonios de la raza, la República se hallará falta de un asiento que le es indispensable" ("Iglesia y

Estado. - Una declaración de la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos". "El Uetate", 22 de abril de 1931 y "El Sol" 23 de abril de 1931. Ver el apéndice num. 4).

Con una finalidad similar a la persecución por la "Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos" publicaría "El Sol" un editorial llamando a la mutua tolerancia al gobierno y a la jerarquía, si bien insistiendo especialmente en el tema de la libertad de creencias, cuestión esta que, para el editorialista, era ajena a la unidad de España, contrariamente a lo sostenido en su día por Menéndez Pelayo y, sobre todo, contrariamente al criterio que, como vemos viendo, mantenía la jerarquía católica española: al tiempo, no obstante, hacía hincapié en la necesidad de un respeto total a la religión católica, pues respeto y tolerancia habían de ser las bases fundamentales para la consolidación de la República:

"Están miles y miles de españoles inquiriendo los designios de la República en materia religiosa. ¿La revisión del Concordato con la Santa Sede será inmedista? Hasta ahora no hay más dato que el respeto que el señor ministro de Justicia ha guardado a las creencias. La cortesía de D. Fernando de los Ríos es de abolengo platónico y se complace en la concordia. Las jerarquías de la Iglesia entablan sin recelo el diálogo con el ministro, en la circular de un obispo se recuerdan los miramientos que los señores sacerdotes deben a las autoridades de la República. Adviene, como se ve, el orden nuevo bajo el signo de la tolerancia. Sostuvimos que las creencias han sido entre nosotros justificaciones de vida durante cientos de años. Discrepamos, eso sí, del criterio con que el autor de la "Historia de los heterodoxos españoles" reduce a creencia la unidad de la patria. Los antecedentes que el gran montañés blande en su apología son demasiado remotos.

...
"Que la nación se glorie de estos antecedentes es bien legítimo; pero que funde en ellos su unidad nos choca. España, en edades menos remotas, evangeliza medio mundo, y es la luz de Trento y el verbo de la Contrarreforma. Para Menéndez y Pelayo, el día en que la unidad religiosa se pierda, España volverá al cantonalismo de los arevacos, de los velfores o de los reyes de talas. Este lenguaje, con honrar a quien rectoralmente nos lo enseña, es anacrónico. Nos gusta menos el de la Francia legitimista, que propone un catolicismo de Estado independiente de la fe, se pretende alzar allí: frente a Roma una Avignon torreada y tiarada que tramite la salvación de los condecorados franceses. No; la fe no sea la unidad, pero menos un resorte del Estado. No la utilice la República, pero no la desarraigue en las conciencias.

"Respeto para quien no cree pedimos; pero respeto sin sombra de salvajeza para quien cree. Los sentimientos religiosos no constituyen unidad en el orden político, pero sí para miles de compatriotas en el orden familiar, y son por tanto, bienes inestimables. La libertad de creencias y de cultos en la joven República sea ante todo una garantía. Libertad, sí; pero tolerancia exquisita, como esa a que propende D. Fernando de los Ríos; respeto sobre todo... y el nuevo régimen se ira consolidando."

"Bajo el signo de la tolerancia: La República y el respeto a las creencias". "El Sol", 22 de abril de 1931).

1.2. Las instrucciones simultáneas a las del Vaticano:
arzobispos y obispos de Santiago de Compostela, Granada
(vicario capitular) Córdoba, Calahorra, Zamora, Urgel,
Orense, Astorga y Oviedo.

Hay una serie de documentos de los prelados sobre los que, tanto por la fecha en que fueron redactados como por su contenido, es difícil precisar si fueron escritos antes o después de conocer las instrucciones dictadas por la Santa Sede. Figuran entre ellos los del arzobispo de Santiago, el vicario capitular de Granada, y los obispos de Córdoba, Calahorra, Urgel, Zamora, Orense, Astorga y Oviedo. Si bien en el caso de los dos primeros, redactados el 25 de abril aunque no publicados hasta el día 30 y el 1 de mayo, respectivamente, parece plausible pensar en la imposibilidad de haber recibido en esa fecha la carta del nuncio, de la cual, según se intiere por el comentario del boletín oficial de Pamplona, solo tenemos la seguridad de que el día 1 de mayo había sido recibida en las distintas diócesis y archidiócesis.

Hecha esta salvedad nos referiremos a las exhortaciones efectuadas por estos miembros del episcopado: el arzobispo de Santiago, en una circular dirigida a sus sacerdotes, religiosos y fieles el 25 de abril, aludía sin reticencias a la instauración de la República, si bien no dejaba de recordar la superioridad de la Iglesia sobre cualquier acontecimiento político -respecto a los cuales y dado su fin sobrenatural, se situaba en un plano ajeno y superior-, su poder de dirección moral de la sociedad y su capacidad de reacción ante gobiernos que pudieran ir contra sus derechos o dictar "leyes injustas". Así les señalaba, "en estas circunstancias especialísimas porque atraviesa la vida política de nuestra querida Patria", la necesidad de seguir

la tradicional actitud de la Iglesia ante los distintos regimenes políticos, pues ella dejaba a los pueblos "que se muevan libremente en el dilatado campo de la actividad humana, les dicta como Maestra infalible las normas que son el fundamento del orden y del bien material y espiritual de los pueblos (...), y solamente cuando los gobernantes quieren poner trabas al ejercicio legitimo de sus imprescriptibles derechos, cuando promulgan leyes que pueden ser causa de la ruina eterna de las almas, cuando, para fomentar un falso progreso material, se lesionan los justos derechos de los individuos y se olvida el fin último de la sociedad, entonces es cuando unicamente levanta su voz la Iglesia Catolica para defender la causa de Dios, que es la causa de la justicia, y a las leyes injustas de los poderes civiles opone el 'Non possumus' de los Pontifices o el 'Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres' de los Apostoles".

Esta era la norma a seguir respecto al gobierno, al que se debía "respeto, obediencia y colaboración para el mantenimiento del orden y de la paz interior y exterior y para laborar por el bien y el progreso material y espiritual de nuestra amadisima España". Por ello, y en consonancia con las normas pontificias sobre predicación sagrada, no se llevarian al púlpito cuestiones politicas, "y mucho menos se permita ningunos alusiones directas o indirectas a los efectos o conveniencias de un regimen sobre otro".

Tras esta frase, que choca -como hemos visto- con las alusiones indirectas de muchos prelados, entre las que siempre destacarian las del cardenal SEGURA, acababa exhortando a la oración con motivo de los cultos especiales de mayo y junio, a fin de que el cielo concediera "a nuestra queridissima Patria paz en los individuos, justicia y acierto en los gobernantes, espíritu de sumisión y obediencia en los subditos, de caridad y desprendimiento en los poderosos, de resignación y conformidad en los humildes, y en todos, amor

al trabajo, desprecio al lujo y, sobre todo, aquel espíritu profundamente cristiano que fue el patrimonio más querido de nuestros antepasados". De esta forma con el esfuerzo en el cumplimiento de los respectivos deberes y "si resistimos con valentía las sugerencias a la indisciplina y al desorden", España "volverá a ser la señora de los grandes destinos de los siglos pasados".⁽²⁸⁾

El vicario capitular de Granada, Dr. Lino RODRIGO RUESCA en una escueta circular también de 25 de abril, se limitó, "en atención a las actuales circunstancias", a dictar unas breves disposiciones sobre la celebración de rogativas públicas en todas las iglesias en los días festivos de mayo y junio: "por las necesidades de la patria, para impetrar del cielo la paz y prosperidad de nuestra amada España". Esta Circular no contiene, por tanto, alusión alguna al respeto o acatamiento a los poderes constituidos.⁽²⁹⁾

El primer prelado que, entre los examinados, escribió una pastoral sobre la actitud que los católicos debían asumir ante el cambio de régimen, fue el obispo de Córdoba que, con fecha 26 de abril, se dirigió "Al clero y fieles de nuestra diócesis". Por la extremada terminología que utiliza para orientar a los fieles en las nuevas circunstancias políticas y su énfasis en resaltar la gravedad de la situación y la inquietud que originaba, no cabe calificar el documento del Dr. Adolfo PÉREZ MUÑOZ como de los que entrañan una disposición positiva, pudiendo inferirse entre líneas que para el mismo el acatamiento a las nuevas autoridades se situaba más en el plano del deber que en el de la convicción.

(28) 25 de abril de 1931, "Circular", BDE de Santiago, año 70, 30 de abril de 1931, núm. 2652, pág. 247-249.

(29) 25 de abril de 1931, BDE de Granada, año 86, 1 de mayo de 1931, núm. 3478, págs. 606-607.

"Nunca fue tan necesario, como en los momentos actuales, que todos se apresten con entereza cristiana a cumplir sin desalientos su propio deber. La gravedad de la hora presente demanda gran serenidad y sería ceguera imperdonable enjuiciar, con criterio apasionado, los trascendentales acontecimientos que están desarrollándose en nuestra querida patria.

"Por eso, ante todo, os rogamos, amadísimos hijos, que sepáis frenar con mano de hierro los excesos de la pasión, sea cual fuere el sentido en que pretenda arrastraros y no perdáis la obligada ecuanimidad con que ha de abordar los problemas de su vida el hombre cristiano, para quien el supremo estímulo ha de ser la voz austera y grave del deber."

No era competencia suya señalarles lo que en el orden político les incumbía, pues la Iglesia era indiferente a las varias formas de gobierno, "mientras queden a salvo la religión y la moral", por ello tan sólo tenía que recordarles "que es obligación ineludible de todo cristiano someterse con sinceridad a los poderes constituidos y acatar respetuosamente a las autoridades, prestando a sus disposiciones la obediencia de quien sabe que no hay potestad sino de Dios y el que resiste a la autoridad, resiste a la ordenación divina". Esto era especialmente aplicable a los sacerdotes y religiosos, de quienes esperaba "se abstengan de mezclarse para nada en asuntos políticos y vaquen exclusivamente a las sagradas ocupaciones de su elevado ministerio, laborando por el mantenimiento del orden y del bien común".

"A nadie le pedimos que sacrifique ni sus ideas, ni sus convicciones; pero sí exigimos de todos que tomen por norma de su conducta las enseñanzas de la Iglesia y antepongan a sus particulares afectos y a sus propias opiniones el austero cumplimiento de una doctrina de la que, por nuestro carácter sacerdotal, debemos ser continuos heraldos con nuestras palabras y con nuestras acciones.

"Tenemos plena conciencia de lo que, para el porvenir de la religión y de la patria, significan las modificaciones que en la actualidad se están gestando y comprendemos que en estos críticos momentos nuestro deber nos obliga, con mayores apremios que nunca, a levantar nuestros corazones al cielo y pedir a Dios, con todas las veras de nuestras almas, que nos asista de cerca, dando a los gobernantes las luces necesarias para que desempeñen acertadamente su alta misión y a los gobernados una conducta recta y serena, respetuosa con la autoridad y caritativa con todos."

Tras estas instrucciones exhortaba a una intensa oración en el próximo mes de mayo, pues la Virgen "sabra velar por nuestra amada patria y nos hará ver como la compleja trama de los hechos de la Historia esta tejida con el hilo de oro de la divina Providencia que, a través de los sucesos humanos, va siempre realizando sus sapientísimos designios", no obstante "las flores de la devoción (...) tienen también punzantes espinas de preocupación e inquietudes" por lo que habían de hacer el propósito de ser fieles hijos suyos, "dispuestos a todos los sacrificios por su gloria y por la de su divino Hijo", y teniendo "la seguridad plena de que Ella no nos ha de abandonar en las contingencias actuales para cumplir con rigurosa exactitud los deberes que nos impone la hora presente". A fin de ordenar estas oraciones establecía una serie de "rogativas públicas" encareciendo a los fieles que "pongan singular devoción y unan sus intenciones a las de la Iglesia. Acababa pidiendo a las Comunidades Religiosas que continuasen haciendo las preces especiales que venían realizando, "pidiendo por la Iglesia y por la Patria".

(30) 26 de abril de 1931, "Exhortación pastoral", BOE de Córdoba, año 74, 27 de abril de 1931, núm. 5, págs. III-IIIa. (Las pastorales de los prelados incluían como "addenda" la indicación de que debían ser leídas en todas las iglesias el primer domingo después de su recepción omitiéndose la homilía).

El obispo de Calahorra, Dr. Fidel GARCIA MARTINEZ figura ente los que no escribieron documento expreso sobre el cambio de regimen, pero, como habian hecho BALANZA e ILUNDAIN, aprovecharia la redacción de su circular sobre el mes de mayo para aludir a las nuevas circunstancias políticas, sobre las que no dejaba de destacar su dimensión negativa de posible "prueba" providencial para los católicos. Es este el prelado que por primera vez va a enjuiciar en este periodo la probable superficialidad religiosa de muchos fieles, tema que será recurrentemente desgarnado por el episcopado a lo largo del primer bienio republicano; consideraba positivo que la "prueba" que se avecinaba sirviera para clarificar la situación de los que seguian rectamente el cristianismo, sobre el que -con una consideración que tambien veremos reiterada por otros prelados- no dejara de expresar las coordenadas de "virilidad" que ha de encerrar. muestra clara de que la jerarquia destinaba sus escritos especialmente a los fieles varones:

"... las presentes circunstancias por las que atraviesa nuestra Patria, deben ser para nosotros una razon más que nos mueva a la renovación y tonificación de nuestra vida religiosa y al mas diligente cumplimiento de todos nuestros deberes y a la devoción fervorosa y confiada...

«Ahora, más que nunca, debemos avivar nuestra fe en la Divina Providencia, que permite o dispone todas las cosas, prosperas o adversas, para nuestra edificación, para nuestra prueba o para castigo de nuestras culpas; pero siempre para nuestro bien, si nosotros sabemos aprovecharnos de ellas y responder fielmente a los planes providenciales. Ahí esta toda la dificultad y todo el secreto del éxito: en que nosotros respondamos bien a la prueba.

«Tal vez entre nosotros habia muchos católicos durmientes, comodones, egoistas, perezosos, inactivos sin fortaleza ni energias espirituales y, sobre todo, sin nada de espíritu de sacrificio, que es el tónico por excelencia de la vida cristiana. Dios permite en tales ocasiones...

que su Iglesia sea cribada como el trigo de las eras. Algunos en esa prueba flaquearán. Son la paja que se separa del grano; son los cobardes, los pesimistas, los vencidos, los insubstanciales, los afeminados, los egoístas. En cambio, los verdaderos cristianos se afirmarán más, se purificarán más, lograrán una vida más excelsa y más fecunda y sentirán que por sus venas empieza a circular sangre de mártires.

"Somos servidores de un Rey Eterno, que no puede morir, ni ser destronado: Jesucristo. Por eso el pesimismo ebervante no es cristiano; por eso el verdadero creyente debe permanecer sereno, fuerte y activo."

Tras estas palabras, y una vez reiterado que la sinceridad y devoción han de sustituir a cuanto se venía haciendo superficial y rutinariamente, pasará el prelado a hacer a los sacerdotes las recomendaciones que ya hemos visto formuladas por otros miembros de la jerarquía, con carácter general, sobre abstención de toda alusión a contiendas políticas en la predicación y no participación en ellas; acatamiento a los poderes constituidos "obedeciéndoles lealmente en todo lo que no se oponga a las leyes superiores de Dios o de la Iglesia, y cooperando con ellos... a todo lo que ceda en pro del orden, de la paz, de la justicia, de la moralidad y del bien común", y elevación de rogativas "por España, por el Gobierno y Autoridades... a mayor bien de la Religión y de la Patria, que están por encima de todas las formas accidentales de gobierno".⁽³¹⁾

(31) 27 de abril de 1931, "Circular sobre celebración del mes de mayo y sobre el cincuenta aniversario del Concilio de Efeso", BOE de Calanorra y La Calzada, año 72, 29 de abril de 1931, núm. 7, págs. 161-166.

Al igual que había hecho el Dr. PÉREZ MUÑOZ, también el obispo de Zamora, Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA utilizó la más relevante forma de "pastoral" como instrumento para referirse al cambio de régimen. La manera en que aludía al respeto debido a la autoridad legítimamente constituida y el hecho de comentar por primera vez la forma serena en que se había efectuado el cambio político, alabando tal proceder y dando gracias por ello, sitúa esta pastoral entre las que revelan un cierto matiz positivo ante las nuevas circunstancias. Así, si por una parte destacara el prelado que la paz que imperó en la transición era fruto de una atención especial sobre España por parte de la providencia, "que dirige y ordena... todos los acontecimientos de la historia", no dejara de elogiar la reacción propia del libre albedrío de la sociedad española, indicando como era "justo... que apuntemos en el haber de nuestro gran pueblo y hagamos destacar para su enaltecimiento, el que crisis tan honda en la vida nacional, cual es la transición y cambio de régimen en el gobierno, se haya desarrollado y consumado en medio de tanto orden, sensatez y mesura como apenas se recuerda en otro país de los afectados por transformaciones análogas".

Dicho esto pasará el obispo a tratar del indiferentismo de las formas de gobierno para la Iglesia, ya que tales cambios "siempre fueron y seguirán siendo condición de las cosas e instituciones humanas en función de los juicios y voluntades de los hombres" y a exhortar al clero a la máxima prudencia respecto a la política, recomendándole la huida de toda lucra que pudiera darse en ese ámbito y la acción en pro de la concordia.

Abundando en estas ideas, sin duda para clarificar en lo posible la actuación a seguir por los sacerdotes, añadirá el prelado que, si bien existía un nexo entre el derecho por el que una sociedad se regía y la moral y entre esta y la

religión, que la informaba y era su fundamento, nunca podría "identificarse ni confundirse la religión y la política en aquellas materias, en aquellas cuestiones que Dios ha entregado a las disputas de los hombres", materias respecto a las que deberían comportarse "de un modo digno del estado a que habeis sido llamados". Aunque, como indicamos, el propósito del Dr. ARCE no podía ser otro que dilucidar la línea de separación entre la actuación propia de la Iglesia y la relativa al ámbito civil, no negaba la posible participación sacerdotal en este, para lo que únicamente recomendaba proceder con dignidad; sin duda porque pese a la evangelica frase de "dad a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar", o pese a la teoría de las dos espadas del papa Gelasio, y aun existiendo temas tanto específicamente políticos como religiosos, o dándose la real posibilidad de que incluso los sacerdotes llegaran a ser diputados, otros había que tarde o temprano atañerían a las dos esferas, como inmediatamente sucedió al comenzar la actuación política a limitar privilegios hasta entonces detentados por la Iglesia española; obvia era la separación, si, entre política y fe religiosa; no lo era tanto, como parece que el prelado quería dar a entender, la que podía deducirse entre religión y política en todas las materias dejadas "a las disputas de los hombres"; protagonista esencial de tales disputas durante el primer bienio republicano iba a ser precisamente, "la cuestión religiosa".⁽³²⁾

Aunque no publicada hasta el 1 de junio en el boletín diocesano, redactó el obispo de Urgel el 27 de abril una circular que dirigió privadamente a las "Mesas de Conferencia" de la diócesis para orientar al clero ante la nueva situación política y que debía ser leída en la reunión

(32) 27 de abril de 1931, "Exhortación Pastoral", BDE de Zamora, año 68, 27 de abril de 1931, núm. 6, págs. 97-100.

de dichas mesas del mes de mayo.⁽³³⁾

Con este documento queria el Dr. Justino GUITART y VILARDEBÓ recordar a los sacerdotes de su diócesis las normas de la Iglesia sobre el acatamiento y respeto debidos a los poderes legitimamente constituidos, ya que ésta "en principio, acepta indistintamente cualesquiera formas politicas de gobierno, así monarquicos como republicanos... salvo el caso de que sus disposiciones fueren contrarias a las leyes divinas o eclesiásticas".

El clero, sin embargo, al igual que los fieles, podia tener sus propias opiniones politicas mientras no se opusieran a la doctrina catolica, más debia abstenerse "de toda manifestación o alusion politica, en el ejercicio de su ministerio" y aun en el orden privado les convenia "guardar suma circunspeccion sobre este asunto".

Frente a ello, y como primicia ante la proxima contienda electoral, aludira escuetamente a la actitud participativa de los creyentes lejos de toda abstención:

"Dentro del régimen legitimamente constituido en cada país, es obligación de los católicos intervenir en la cosa publica, cuanto les permitan las leyes y las necesidades del momento lo reclamen, para fomentar el bien comun, y para que sean respetados los sagrados derechos de la Iglesia."

(33) Esta disparidad de fechas responderia probablemente a los acuerdos adoptados en la conferencia episcopal de la provincia eclesiastica tarraconense que, si bien se referian a que los obispos orientarian verbalmente al clero, cosa que, como vemos, no todos los prelados de la provincia cumplieron, añadian que no hubiera publicación alguna en los boletines diocesanos sobre la conducta a seguir ante el cambio de régimen,

Tras indicar que la aplicación de las normas que dictaba a las circunstancias generales imperantes en esas fechas en España y a las particulares de Cataluña era tan obvia "que sería ocioso descender a pormenores", acababa pidiendo a los sacerdotes que las guardaran y procurasen que igual hicieran los fieles "para que todos a una contribuyan, en la medida de sus fuerzas, al mantenimiento de la paz social y al fomento de los intereses morales y materiales del país, con acendrado espíritu de cristiana caridad", pidiendo a Dios la paz y la asistencia a los nuevos gobernantes "para la reconstitución del edificio social, por tantos conceptos desmoronado, y defensa a nuestra querida Patria contra los enemigos de la pública tranquilidad, base imprescindible de todo progreso".¹³⁴

También el obispo de Orense, Dr. Florencio CERVINO GONZALEZ utilizaría la forma de pastoral para referirse al cambio de régimen, iniciando ya, en su primer documento del periodo republicano, una toma de posición ultramontana que no dejaría de mantener en lo sucesivo. Comenzando con una pesimista visión sobre la fugacidad de las cosas del mundo y la perdurabilidad del poder divino, destacará como los fieles han de consolarse en el pensamiento de que, si bien "todo acaba" y "no hay república ni monarquía que perdure", la Iglesia es inmutable y "no hay odio ni poder posible que la derribe" así como en el que el destino de España, "envuelta en incertidumbres y dudas y expuesta a graves conflictos", está en manos de la providencia, y, sea próspero o adverso, será siempre para su bien y ello (y hay

(34) 27 de abril de 1931, "Circular enviada por Su Excelencia Reverendísima a las Mesas de Conferencia de esta Diócesis", BOE de Urgel, año 76, 1 de junio de 1931, núm. 11, págs. 163-164. A esta circular antecede en el boletín la del cardenal VIDAL de 4 de mayo. Ver la nota 78.

aquí una implícita y negativa opinión sobre la caída de la monarquía y la instauración de la República) "aun en eso que pueda tener de duro y amargo, de repugnante y contrario a lo que por ventura acariciábamos y hubiéramos preferido..."

Tras estas reveladoras palabras lanzará el prelado una sucinta advertencia ciertamente premonitrice y, sin duda, motivada por las consecuencias que, según la opinión pública, pudiera tener la proclamación efectuada por el Gobierno provisional respecto a la libertad de creencias y cultos, al aludir a como los fieles deberían abandonar las apariencias porque se regían y pasar a tener una sincera actitud en la vivencia de su fe, siendo "dignos y fieles españoles", tal como lo fueron sus antepasados, que civilizaron nuevos mundos bajo el signo de la cruz, "...y se nos arrancaría el corazón si de los colegios y escuelas en que se forman nuestros niños se arrancara"; no abundará el Dr. CERVINO en esta posibilidad carente en aquellas fechas de respaldo real, aunque sin duda basada en rumores y declaraciones oficiales, fue la suya una alusión pionera y escueta cuya desapercibida importancia no se revelaría hasta mediados de mayo.⁽²⁵⁾

Insistirá a continuación el obispo (y ello es también novedad en las recomendaciones efectuadas en estos primeros momentos a los fieles, por cuanto, a diferencia de lo indicado por otros miembros de la jerarquía, les instará a actuar decididamente, a "influir") en que cada uno había de esforzarse según "su condición y esfera: influya, trabaje y

(25) Sobre este extremo ver el capítulo "la cuestión de la enseñanza".

ore...". actitud (y aquí el obispo es en extremo laconico al referirse a la postura doctrinal de la Iglesia) "perfectamente compatible con el respeto y sumisión que a las autoridades constituidas debemos". Forma de respeto y sumisión que desarrollara seguidamente en lo que se refiere al clero, según las líneas ya marcadas por sus hermanos en el episcopado y "teniendo en cuenta el reciente cambio de régimen operado en España y las difficilísimas circunstancias porque todavía esta atraviesa"; así le instara a la abstención en punto a "intervenir apasionadamente en negocios seculares y contiendas políticas", según lo establecido tanto en las normas civiles como en las canónicas sobre este extremo; a no hacer, en la predicación, "alusiones directas o indirectas al actual estado de cosas" "tanto más cuanto añadiría en una negativa valoración de la pública opinión y de las coordenadas en que en aquellos momentos se movía, y a fin de que los sacerdotes extremaran, por precavidos, su prudencia-, dada la excitación de ánimos, propenderan los oyentes, con buena o mala intención, a interpretaciones injustas y apasionadas"; habrían de mostrar, también, su interés por la paz y concordia, removiendo, "en cuanto de su voluntad dependa", los obstáculos que a ello se opongan, línea de actuación sobre la que el prelado reitera la necesidad de colaboración y respeto a las autoridades, a las que deberían, incluso, apoyar en los siguientes términos: "... guardaran todas las consideraciones, honores y respetos debidos a las autoridades seculares, y hasta las secundaran y colaboraran con ellas en todo lo que redunde en beneficio común y utilidad pública". Por último, y con una visión sin duda pesimista del futuro inmediato, trataría el prelado del deber que incumbía a todos los sacerdotes de "rogar incesantemente ..., a medida que arrecien los conflictos o sean más duras las pruebas a que se vea expuesta la Patria, por lo que en ella vinculan y representan en

sus personas, autoridad o cargo, deberes, ministerios y funciones de suma trascendencia social y religiosa", y, así, no solo debían pedir, como era tradicional, por el papa y obispos, sino también "por cuantos ejerzan potestad sobre nosotros, desempeñando cargos y designios, sin duda providenciales, que bien pudieran ser de vida o muerte para esta nación querida ... siempre eficazmente defendida contra moros y herejes por su aclamado Patrono Santiago..."; debían, pues, orar sin descanso y dejar "en manos de Dios, como ya lo está, la salvación de España; en la seguridad de que cualquiera que sea su forma de Gobierno y actuación política, será siempre aceptable, y aun deseable y preferible siendo justa, general y eficazmente provechosa para el bien público, inseparable naturalmente de la religión que distingue al hombre de las bestias."⁽³⁶⁾

Mucho más concisamente que el de Orense, también el obispo de Astorga se dirigía el mismo día 28 de abril a sus diocesanos por medio de una pastoral en la que se limitaría a exponer la doctrina eclesial sobre el poder civil, si bien señalara el límite impuesto en el deber de acatamiento al mismo; es singular de esta pastoral la minuciosidad a que llega el prelado al dictar las normas a que debían ceñirse los sacerdotes en sus relaciones con las autoridades públicas o en sus referencias a ellas. De esta forma, y una vez ha aludido a la providencia divina en los acontecimientos humanos, recomendará a todos, clero y seglares, "acatar lealmente los hechos consumados en nuestra patria, respetando los nuevos poderes constituidos y obediéndolos para el mantenimiento del orden, que es base

(36) 28 de abril de 1931, "Exhortación Pastoral", BOE de Orense, año 98, 29 de abril de 1931, núm. 9, págs. 129-134.

y fundamento de la vida del país, y para el bien común, que a todos por igual afecta e interesa". Tal es, dirá, la doctrina de la Iglesia, que solo reconoce un motivo de desobediencia de los católicos a las autoridades civiles "y es cuando se les pide algo que repugna abiertamente al derecho natural o divino".

Para el más fácil cumplimiento de todo cuanto ha indicado, los sacerdotes deberían extremar las medidas de prudencia en la predicación, limitándose a la exposición religiosa y "evitando delicadamente toda alusión que haga referencia al reciente cambio de régimen", mas no solo eso, pues también deberían "evitar en privado y en público, de palabra y por escrito, cualquier manifestación de desagrado, de censura o de hostilidad a las autoridades locales o provinciales y, con mayor razón, a las del poder central de la Nación", por último deberían acudir a él cuando en el desarrollo de su ministerio encontraran "alguna dificultad originada por las actuales circunstancias". Finalizará su escrito aludiendo a los cultos a efectuar, cuya realización deja a la libertad de los parrocos "teniendo en cuenta las condiciones de la feligresía", a fin de impetrar "la conservación de nuestra fe católica y la prosperidad espiritual y temporal de nuestra Patria".⁽³⁷⁾

Hemos de referirnos, para concluir este examen de los documentos de la jerarquía eclesiástica simultáneos al envío de las instrucciones del Vaticano, a la relevante circular suscrita el 29 de abril por el obispo de Oviedo Dr. Juan Bautista LUIS y PÉREZ, que en dicha fecha se dirigió al

(37) 28 de abril de 1931, "El Obispo de Astorga al clero y a los fieles de su diócesis", BOE de Astorga, año 79, 1 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 187-181.

ciero y fieles de su diócesis a fin de darles, tal como indicaba, "normas en las presentes circunstancias de la Nación", circular que es, entre los documentos emanados de la jerarquía hasta ahora examinados, el que mayor carga política encierra, tanto por su forma como por el fin que persigue y en la que se plasman el inteligente estilo del prelado y su crítica apreciación de los hechos.

Los ejes básicos informan el escrito. En uno de ellos el obispo va a exponer lo que, en su opinión, los ciudadanos creyentes han de demandar y deben esperar del nuevo régimen. El contraste de la inmediata realidad con esta exposición hace que el otro eje encierre un concreto llamamiento a los católicos (y este es el primer pronunciamiento claro de la jerarquía sobre la actuación política de los fieles, apenas iniciado, como hemos visto, por el obispo de Orense), a fin de que se unan por encima de sus personales ideologías en defensa de los intereses de la religión.

En la primera parte de la circular el obispo de Oviedo reiterará la ya tantas veces vista doctrina sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos, dado que tal doctrina era la mejor a seguir en aquellos momentos, toda vez que "La profunda conmoción que experimenta nuestra amada Patria con motivo del cambio de Régimen exige una extremada discreción de parte de todos los ciudadanos, y especialmente de los sacerdotes, por la mayor trascendencia de sus actos como directores y pastores de almas", razón por la que a ellos va a referirse especialmente recordándoles lo dispuesto por la Iglesia respecto a la intervención de los sacerdotes en cuestiones políticas, no sin antes señalar a todos sus diócesanos que deben respetar y obedecer a las autoridades "mientras no nos manden cosas contrarias a la Ley de Dios".

Tras ello haría el Dr. LUIS F. FARIAS un comentario que solo cabe referir a la actitud mantenida por los integristas contrarios a la línea moderantista propagada, de mejor o peor grado, por la jerarquía.¹³⁶ y, así, dirá:

"En tenemos por esta conducta vemos envueltos en ciertas acusaciones que hoy se prodigan. Afirmamos nuestro respeto y obediencia a la autoridad constituida no hacemos un acto político, cumplimos un deber de conciencia y nos movemos desinteresadamente por puro amor a la Patria en cuanto esta continuamente ligada con el amor de Dios."

Pero el prelado entendía que para muchos católicos el cambio de régimen y las noticias difundidas sobre la actuación de los nuevos gobernadores eran causa de inquietud y, por ello, insistirá en que "el pesimismo es anticristiano", en que no había, desde luego, que "desconocer la gravedad de la hora presente", pero haciéndolo sin caer en la desesperanza, ya que ello sería "entregarse voluntariamente al vencimiento y renunciar a una victoria que todavía está al alcance de nuestro esfuerzo", expresion esta con la que, lejos de aludir a posibles confrontaciones entre catolicismo y República, el prelado quiere referirse al logro conjunto de un positivo porvenir para la nación que ve posible alcanzar en base a los valores que esta posee. Tales valores serán analizados por él en dos vertientes: la del conocimiento científico y la de la realidad económico-social, extremos ambos sobre los que sus consideraciones contienen, como hemos apuntado, claras indicaciones sobre la actuación que habían de seguir los poderes públicos. Así, en primer lugar -y en forma que tenía que ser necesariamente grata a los pro-hombres de la democracia- dirá que "Tenemos

¹³⁶ Sobre esta actitud ver CUELLA 1961:223. *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea, 1850-1960*, Madrid, 1965, págs. 22-23.

derecho a esperar que una sana libertad y un fácil acceso de todas las capacidades al estudio y a la investigación, despierten iniciativas y nobles emulaciones en un ambiente de tolerancia y de mutua comprensión,⁽³⁹⁾ pues la dilatación del saber en un ambiente fraterno, habría de conducir al amor a la verdad, camino que, para el obispo, "es el primer paso hacia Dios"; más, abundando en en este tema, vendrá a delimitar lo que había de entenderse como "sana libertad" al apuntar, en una línea también esbozada ya por el obispo de Orense, que "la Nación católica por excelencia tiene derecho a esperar que los niños y jóvenes no serán sometidos a colorosas experiencias que han roto la unidad y la paz de otros pueblos, para reconocer al fin que se ha perdido un tiempo precioso, que se han envenenado muchas almas y que la moral y la ciudadanía han sufrido gravísimos e insuperables quebrantos". Junto a esta clara advertencia sobre la posibilidad y peligros de la supresión de la formación confesional y, en relación con ella, el Dr. LUIS Y PEREZ haría una concreta referencia al punto que para la Iglesia era más conflictivo entre los contenidos en el programa del gobierno provisional, referencia en la que, en principio, parece aceptarse sin discusión la implantación de la libertad religiosa pero que, pese a la sinceridad con que pudiera aludir a ello, había de tener, según su pensamiento, una ilimitada configuración dados los requisitos que tal implantación había de llevar y que cabe deducir de la ambigua frase con que el prelado los describe: "Cualquiera que sea la libertad religiosa que se juzgue necesaria, no

(39) Como contraste a esta progresista postura del Dr. LUIS Y PEREZ ver en el capítulo "La cuestión de la enseñanza", la pastoral del obispo de Palencia, Dr. PARRADO, de 29 de octubre de 1933.

sera seguramente la obra de un juicio particular, sino la que demanden los hechos y las realidades, estimados por las autoridades legítimas y por los cauces de la justicia y el derecho"; frase de la que parece deducirse que la medida de la libertad religiosa nunca podría ser fruto de una decisión política que el gobierno adoptara, tal medida debía atemperarse a la realidad de una nación que, como acababa de proclamar, era la "católica por excelencia" por lo que, obviamente, nunca podría ir en contra de este hecho, que las autoridades debían necesariamente valorar excluyendo cualquier pronunciamiento apriorístico o arbitrario, y ello dejando a salvo la posible interpretación de que el objetivo último del obispo era advertir veladamente que cualquier acuerdo sobre este extremo había de reservarse a las nuevas Cortes y no podía ser adoptado por un gobierno que solo detentaba poderes con carácter provisional.

Párrafo especial dedicaba seguidamente el prelado al orden económico, rechazando nuevamente en este punto todo pesimismo por parte de los creyentes ya que si tal orden estaba "profundamente perturbado" y poco se había avanzado en los hechos, la doctrina de la Iglesia ejercía ya "un dominio indestructible" sobre las convicciones, faltando únicamente "luz sobre las utopías y adulaciones y promesas irrealizables que hoy enloquecen al pueblo"; debía organizarse y distribuirse mejor la riqueza y vencerse "seculares egoísmos"; la forma de llegar a ello era, precisamente, dar a la Iglesia católica la necesaria libertad a fin de que fuera ella la que infundiera en todos la conciencia del deber y "para que el factor moral ocupe el lugar que le corresponde". Con ello venía a concretarse su anterior aceptación de la libertad religiosa ya que lo que el obispo hacía, en definitiva, era pergeñar un plan de ac-

tucion presidido por la "colaboracion de la Iglesia y del Estado"; así se lograria la cooperacion del capital y el trabajo, la conciencia y el derecho, y la moralidad y la justicia, lo cual habia de conducir a la concordia, al bienestar y al progreso tanto moral como economico.

Como se ve, el Dr. LUIS Y PAREZ dibujaba un idílico modelo de actuacion en el que, bajo un personal entendimiento de la libertad religiosa, habia de primar necesariamente el protagonismo de la Iglesia catolica como maestra suprema de la sociedad y dadora de las normas morales por las que sus miembros habian de regirse y que al Estado incumbia poner en practica. Es obvio, no obstante, que en esta futurista vision el prelado no contemplaba un Estado presidido por el sesgo politico del gobierno provisional, antes al contrario, todas sus palabras iban encaminadas a advertir a los catolicos, por contraste, de lo distinta que era la realidad inmediata y, así, añadiría a continuacion su personal valoracion de la actuacion de aquel, valoracion que, basada sin duda en el contenido de sus primeros decretos, en las manifestaciones de sus miembros ya comentadas, como hemos visto, por "El Debate" y, sobre todo, en la campaña que acababa de iniciarse contra el cardenal SEGURA, a la que mas adelante aludiremos, (40) encierra la primera critica publica que venia a realizar un miembro de

(40) El cardenal VIDAL, máximo exponente a nivel de la jerarquia, de la colaboracion eclesialistica con el gobierno provisional en estos primeros momentos, habia enviado a ALCALA ZAMORA el dia 26 de abril, a tenor de los acuerdos adoptados en la última conferencia episcopal de la provincia tarraconense, un telegrama ofreciendo su cooperacion en pro de la naci6n; en tal telegrama pedia el cese de la campaña iniciada contra el primado *Eglise i Estat durant la segona...*, I, págs. 24-25. El mismo ofrecimiento de cooperaci6n hacia VIDAL al ministro de Justicia, -pese a su falta de atenci6n protocolaria con la jerarquia al no comunicar oficialmente el cambio de regimen ni su toma de posesi6n- por carta suscrita el dia siguiente, *ibid.*, págs. 26 y 31-32.

la jerarquía, si bien no del todo desarrollada, a reserva del juicio a emitir por el Vaticano: "De los errores en doctrina y en conducta que se anuncian o adivinan en la gobernación del Estado, no queremos decir una palabra. La más elemental prudencia nos obliga a prevenir lo que la Santa Sede estime más oportuno y conveniente".

Establecida tal reserva se adelantaba, no obstante, el obispo a señalar cual había de ser la actitud de los católicos en orden a conseguir esa nación que esbozaba y dada la inmediata política gubernamental, y lo hacía estableciendo una norma de conducta que es la pieza clave de esta circular y una verdadera primicia en las recomendaciones del episcopado ante las próximas elecciones, siguiendo la línea ya apuntada por "El Debate":

"Lo que nos interesa prevenir y a lo que exhortamos a los católicos, es que tengan muy presente esta obligación sagrada que nos limitamos a indicar: salva la honesta libertad de pareceres en materia política, y el fomento de los mismos según la voluntad de cada uno, es necesario que todos convengan en salvar los intereses de la Religión en la sociedad; y a este fin, cuantos amen el nombre de católicos deben unirse como en santa alianza, cesar en las discrepancias, y, como decía León XIII, hacer callar por algún tiempo los diversos pareceres en materia política." "siempre dispuestos a obedecer mente et corde", no solo los mandatos, sino también los deseos y consejos del Papa..."

Fras el señalamiento de esta obligación y considerando que la nueva situación política podía ser un verdadero revulsivo para el ámbito católico, el prelado invitaba a

(41) En bastardilla en el original.

todos a la oración, entendiendo que "las conmociones sociales son grandes despertadores de los que duermen en la tibieza religiosa, entregados demasiado al mundo y olvidados de la salvación de su alma". Por último y a fin de que clero y fieles "tengan una norma de conducta clara y segura en las presentes circunstancias", establecía, como el resto de la jerarquía, unas concretas recomendaciones, no sin advertir y reiterar que lo eran "sin perjuicio de que cada uno, según su estado y condición, ejercite oportunamente sus derechos y cumpla con sus deberes ciudadanos"; tales normas aludían nuevamente, entre otros extremos menos relevantes, al acatamiento debido a los poderes constituidos; a la necesidad de que el clero se abstuviera de tomar parte en manifestaciones políticas y en la predicación evitara "todo lo que pudiera servir de pretexto para que se pueda creer que se alude a cuestiones políticas", y, en fin, a la precisión de su licencia expresa para poder escribir o dictar conferencias sobre asuntos políticos; junto a ello establecía una serie de rogativas a fin de que "el Señor... se apiade de nuestra querida patria y que de acierto a sus gobernantes para llevarla por los caminos de la justicia y la paz".

(42) 29 de abril de 1931, "Circular núm. 7 dando normas al Rvdo. Clero y Fieles de la Diócesis en las presentes circunstancias de la Nación", BOE de Oviedo, año 57, 2 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 129-137.



- 1.3. Las orientaciones dadas por la jerarquía una vez recibidas las instrucciones de Roma: arzobispos y obispos de Burgos, Orihuela, Madrid-Alcalá, Palencia, Valladolid, Mallorca, Avila, Salamanca, Tuy, Tarazona (administrador apostólico de Tudela) Sevilla, Málaga y Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo).

En los documentos hasta ahora analizados se mueven sus autores en dos coordenadas: de un lado la doctrina tradicional de la Iglesia ante los nuevos poderes legalmente constituidos y, de otro, el panorama político, las reacciones de los católicos, las conjeturas sobre la actuación de los nuevos gobernantes. Entre doctrina y realidad han ido dictando sus orientaciones con base en su personal criterio y según fuera, realmente, su propia postura ante la República. La falta de instrucciones de la Santa Sede les da esa relativa libertad en la que hemos visto moverse su leal acatamiento, su pesimismo o su neutralidad en unas fechas en las que el nuevo gobierno aun no había dado ningún paso trascendente para que la actitud de la jerarquía pudiera decantarse en pro o en contra del régimen republicano, salvo, claro es, el caso especial del cardenal SEGURA.

Estos distintos pronunciamientos, estos tanteos iniciales entre Iglesia y República marcan estas primeras fechas del nuevo régimen y son una de sus principales características. Los católicos y la jerarquía, con mejor o peor talante, están a la expectativa.

En tal situación el día 24 de abril enviaba el nuncio Tedeschini a todos los prelados españoles la siguiente escueta nota:

"De parte del Emmo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad me honro en comunicar a V.E. Rvma. ser deseo de la Santa Sede que V.E. recomiende a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien comun."¹⁴³

A pesar de estar firmada en igual fecha¹⁴⁴ la circular redactada por el obispo de Madrid-Alcala Dr. Leopoldo EINO Y GARAY ya aludía a las instrucciones emanadas del Vaticano y, así, tras dar cuenta de su recepción y transcribir el encargo recibido, no dejaba el obispo de reflejar la situación en una de las diócesis que, por constituir la capitalidad de la nación, era paradigma de las actitudes reinantes, y lo hacía reconociendo por primera vez, sin veladas alusiones, y quizá queriendo justificar implícitamente la actuación de su propio arzobispo, que para muchos católicos el derrocamiento de la monarquía había sido un duro golpe, mientras que otros habían deseado la instau-

(143) Entre las diócesis cuyos boletines hemos consultado, dos se limitaron a insertar este comunicado sin desarrollo alguno:

El arzobispo de Burgos añadió a la publicación la siguiente frase: "Al dar a conocer a nuestros diocesanos el documento que antecede, abrigamos el convencimiento de que lo en él contenido será fielmente cumplido por todos como deseamos y mandamos", siendo éste el único comentario que el Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO haría sobre el advenimiento de la República y los deberes de los católicos. (BDE de Burgos, año 74, 30 de abril de 1931, núm. 8, págs. 185-186).

Igual de escueto fue el Dr. Francisco Javier IRASORZA LOINAZ, obispo de Ormaiztegui, que tras la carta de TEDESCHINI, añadió: "Esperamos, pues, que nuestros sacerdotes, religiosos y diocesanos todos secundaran los deseos expresos de la Santa Sede, como buenos hijos de la Iglesia nuestra Madre". (BDE de Ormaiztegui, año 50, 15 de mayo de 1931, núm. 9, pág. 177).

(144) Con independencia de la poca fiabilidad de las fechas en que aparecen suscritos los distintos documentos de la jerarquía analizados, es fácil suponer que, dada la cercanía de residencia, la nota del nuncio le sería enviada en bano el mismo día que el resto del episcopado.

ración de la República." Sea como fuere, basándose en un simple y religioso argumento sobre la obediencia, que muy poco tenía que ver con la filosofía propia de un régimen democrático, indicaba el prelado que todos debían acatar el nuevo régimen:

"No dudamos que entre vosotros están los ánimos divididos y que, así como unos han deseado y procurado el advenimiento del nuevo Régimen establecido y son hoy sus fervientes partidarios, así otros habrán visto con pena la desaparición de la secular Monarquía y no querrán negarle en los días adversos el afecto que clamorosamente le mostraban en los prosperos; pero igual unos que otros, si quieren obrar como buenos cristianos, deben obedecer a la autoridad constituida, porque la obediencia a los superiores no es cosa que Dios haya dejado a las disputas de los hombres."

La postura del Dr. BILLO Y GARAY, amen de valientemente reconocedora de los hechos, propugnaba su positiva aceptación:

"Esa sujeción y acatamiento, esa cooperación para toda obra buena, no ha de ser meramente externa ni fingida, sino sincera y leal, no solo porque si no no sería cristiana, mas también porque nos obliga en conciencia; no es el temor, sino la conciencia la que lo inspira."

Por ello, si los católicos actuaban de acuerdo con los mandatos divinos, el gobierno y la patria no habían de temer su oposición sino su cooperación para el bien común.

(45) CUENCA TORIBIO señala como "Anchos estratos del bajo clero quisieron infringir con su abstención o voto republicano un castigo a un sistema con el que no contoraban por la despreocupación hacia la suerte de los sacerdotes y, sobre todo, por la apatía en dinamizar y proteger seriamente el credo tradicional de los españoles", op. cit., pag. 39.

Especial atención dedicara el Dr. EIJO Y GARAY a los sacerdotes a quienes instará a no inclinarse hacia una u otra de las posturas políticas en que los creyentes estaban divididos, antes al contrario, debían cuidar con solicitud el bien espiritual de todos y especialmente el de aquellos que más alejados estuvieran de la verdad revelada, ya que "Si con la sagrada autoridad que Dios nos ha confiado amparamos y cubrimos cosa alguna temporal y terrena licitamente discutible, no podremos justamente quejarnos de que, quienes, en uso de su derecho, disparan contra esta, hieran aquella"

Finalmente, y como todos los demás obispos, acabaría aludiendo a la necesidad de oración, mas con la original consideración, que no hemos encontrado en ningún otro prelado, de que muchos enemigos de la Iglesia creían que, siéndolo, prestaban un servicio a Dios, frase con la que, pensando quizá en los elementos mas progresistas en pro de un nuevo modelo de sociedad, intentaba probablemente buscar la conciliación y acallar los ánimos al querer demostrar que todos, en definitiva, podían pretender el mismo fin, y llamando a todos a la concordia:

"...por los fieles hijos de la Iglesia y por sus enemigos; ¡cuantos de ellos creen que combatiendo la prestan servicio a Dios!. Pidamosle a El que les abra los ojos y les toque el corazón, y que no consienta que, poraltar a nuestros deberes, aumentemos su ceguera; pidamosle y procuremos que, aun en los momentos de mas empeñada lucha, temple todos los ánimos el espíritu de mutua tolerancia, de civil convivencia y de caballeroso respeto, que es flor de caridad cristiana."...

(46) 24 de abril de 1931. "Obispado de Madrid-Alcalá, Circular núm. 93, sobre el respeto y obediencia a los poderes constituidos". BOE de Madrid-Alcalá, año 46, 1 de mayo de 1931, núm. 1534, págs. 173-176.

Aun redactada el 25 de abril la "Exhortación Pastoral al Clero Diocesano" del obispo de Valencia, indicaba este, una vez había expuesto sus instrucciones, que "positivamente Nos consta no ser otra sino la expresada por Nos la voluntad de la Santa Sede, del vicario de Cristo", afirmación de la que cabe conjeturar que el Dr. Agustín FARRADO GARCÍA conocía expresamente la nota de la nunciatura.

El prelado se dirigía a sus sacerdotes al objeto de que fueran transmisores de sus palabras a los fieles y desmenuzaran y aclararan para ellos, como él pasaba a hacer, la doctrina de la Iglesia sobre el orden político, centrándose especialmente y de forma singular en aclarar que el pensamiento eclesástico tradicional sobre el origen divino del poder era compatible con las formas democráticas y poniendo el acento en aquellos extremos que, dada la fundamentación de la de autoridad política contenida en el decreto del día 16, creía preciso resaltar.

Pretendía, pues, el obispo con sus palabras y ante las "grandes preocupaciones por el porvenir de nuestra querida España", resaltar el deber sacerdotal de "contribuir... a la pacificación de los espíritus -de la que depende, más que de ninguna otra cosa, la salvación o ruina de la Patria, según que esta pacificación se logre o se malogre..."- Si los sacerdotes estaban obligados a contribuir en todo momento a la salvación de las almas tal obligación se acrecentaba "cuando se halla expuesta a peligros mayores y más ciertos, cual ocurre ahora por consecuencia inevitable de los cambios que en algunos ordenes de la vida han de seguir al advenimiento del nuevo orden político."

No eran recelosas ni premonitorias las palabras del Dr. FARRADO como lo habían sido las de los obispos de Orense o de Oviedo. No le preocupaban por el momento los derroteros de la actuación política del nuevo gobierno, su inquietud

esencial radicaba en la pureza doctrinal, en la esfera de las creencias de los fieles -que podían alterarse ante la nueva situación política- más que en el mundo de los hechos. Así dirá:

"Ideas que antes fueron y ahora son claras para vosotros tal vez no lo sean, antes oscuras, para algunos de los fieles, y se oscurecerán más, probabilísima o ciertamente, por los apasionamientos y la diversidad de pareceres que suele haber en circunstancias como las nuestras. De donde la necesidad de esclarecerlas a sus ojos, para evitar y deshacer dañosas confusiones."

Esta era una labor que esencialmente correspondía a los sacerdotes, tanto por sus palabras como, esencialmente, por su conducta, "fiel reflejo del pensar y sentir de la Iglesia".

Y de este pensar y sentir quería tratar precisamente el prelado a fin de esclarecer posibles dudas, y pese a que indicaba que de sobra conocía el clero la doctrina de la Iglesia sobre cuestiones políticas, pasaba a exponerla en cuatro básicos puntos: puntos que, curiosamente, serán después ampliamente desarrollados en la pastoral que el 10 de mayo escribiría el Dr. Isidro GOMA, obispo de Tudela. La fundamental novedad de la pastoral del prelado de Palencia radicará en la exposición que hacía del concepto de democracia a la luz de la enseñanza católica y en ser el primer documento del episcopado en que hemos encontrado semejante exposición, quizá por la cautela que, en general, envolvía a la jerarquía y que le aconsejaba no descender a hablar tan claramente sobre cuestiones filosófico-políticas que en nada iban a cambiar la fundamental argumentación: todo poder proviene de Dios y, como ya había apuntado en su pastoral del día 19, la razón de ser de tal poder no era otra que la consecución del bien común:

"1. El poder, como elemento esencial y absolutamente necesario que es de la sociedad, viene de donde viene la sociedad misma, y esta de donde viene el hombre naturalmente social, es decir, de Dios, creador del hombre. No hay poder sino de Dios.

"2. Pero en el orden histórico o de los hechos es por mediación del pueblo como el poder público se transmite a los gobernantes: al pueblo toca elegir la forma de gobierno o señalar el modo concreto para el ejercicio del poder, y a él mismo corresponde designar las personas que han de ejercerle. En este sentido la soberanía nacional o del pueblo es y fue en todo tiempo verdad indiscutible dentro del campo católico, como fue y sigue siendo una herejía en el sentido de excluir o negar el origen divino de los poderes sociales, o de afirmar que la fuente originaria de estos poderes no es de Dios sino del pueblo.

"3. Las formas de gobierno, Monarquía o República, y la diversidad de modalidades que pueden revestir, no son substantivas sino adjetivas y, por ende, accidentales y variables; variabilidad en que ni entra ni sale la Iglesia si no es para decir en nombre de Dios a gobernantes y gobernados, que dentro de toda forma de gobierno se ha de procurar el bien común, primera y última palabra de la teoría cristiana del Estado, y origen, fundamento, materia y límite del poder público. El verdadero y legítimo soberano, después de Dios, solo es el bien común; y contra él puede atentar, como la Monarquía que se convierte en tiranía, la República que degenera en oligarquía o demagogia."

De todo ello, que no era especulación sino verdades para "los problemas concretos de la vida", nacia la consecuencia de que:

"4. ...ante los planteados por el novísimo cambio de régimen en nuestra Patria -que es decir en nuestra propia vida de ciudadanos del Estado español- todos sin excepción, sean cuales fueren las opiniones particulares sobre lo que es opinable, por ser accidental, estamos obligados a acatar sinceramente los poderes constituidos, a respetar y obedecer a las autoridades que los ejercen o en lo sucesivo los ejercieren, y a

cooperar con ellas lealmente a la consecucion del bien comun."

Así, espera que todos, sacerdotes y fieles, pidan a Dios

"...que ilumine con sus luces y asista con sus gracias a los que han asumido la gobernacion del Estado, y cooperando todos a su labor de buen gobierno, salva la conciencia segun la ley de Dios, ellos y nosotros, en las contingencias del presente y las que se ofreceran en el porvenir, acertemos a labrar, mediante el sacrificio de todo particular interes en aras del bien publico, conforme os deciamos poco ha, la felicidad de España dentro del orden, de la paz, de la cristiana fraternidad, de la concordia mutua, para el trabajo honrado y el cumplimiento del deber, principio y base del engrandecimiento de los pueblos."

Al objeto de alcanzar esta meta disponia las oportunas preces para que Dios "conceda el don del acierto a los gobernantes y el espiritu de cristiana obediencia a los subditos" y, a continuacion, dictaba especiales normas para los sacerdotes recomendando que en la predicacion se abstuvieran de descender al terreno politico e incluso evitaran (pese a todo su anterior discurso) alusion alguna a las formas de gobierno y a los partidos, "sino es para recomendar a todos leal sumision a las autoridades publicas y mutua caridad". Tal actitud debian mantener tambien fuera del templo, no mezclandose en discursos politicos y atendiendo exclusivamente a sus deberes sacerdotales ya que, segun llegaba a decir, "el sacerdote alli donde, como tal sacerdote, no es necesario o simplemente conveniente que este, estorba", estricta actitud que habia de chocar con la presencia de los sacerdotes diputados en las inmediatas

constituyentes.⁽⁴⁷⁾

Como colorón de sus palabras exhortará nuevamente a la total colaboración con las nuevas autoridades pero, y ello es una radical novedad, pasará a apuntar la posibilidad de discordias, expresando, en estos primeros momentos, sus deseos de toda conciliación:

"Guarden con las autoridades seculares los debidos respetos y todas las consideraciones, y colaboren a su lado, por los medios que son propios del sacerdote, en la prosecución de sus noble fines.

"Y si a pesar de esta conducta del sacerdote ocurriese alguna colisión de derechos, sea real sea supuesta, por el momento y en gracia de la paz cedan del suyo y acudan a Nos, que cuidaremos de ampararles, resueltos como estamos a ser mansos y condescendientes..."

(47) Dichos sacerdotes fueron: por Burgos: Ricardo GÓMEZ ROJÍ (agrario); por Granada: Luis LOPEZ-DORIGA MESEGUER (radical-socialista); por Guipúzcoa: Antonio PILDRAIN ZAPAIÑ (vasco-navarro); por Santander: Lauro FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ (agrario); por Segovia: Jerónimo GARCÍA GALLEGO (independiente); por Toledo: Ramón MOLINA NIETO (agrario); por Zaragoza: Santiago GUALLAR POZA (agrario) y por Orense: Basilio ALVAREZ RODRÍGUEZ (radical). Según el canon 139,4 era necesario permiso del obispo para que los sacerdotes pudieran presentar su candidatura (*Esglesia i Estat durant la segona...*, 1, pág. 46, nota 6. Indican Batllori y Arbeloa que por testimonios de diversas personas próximas a VIDAL se sabe que el Dr. GOMA pensó presentarse como candidato independiente por Farragón y que el cardenal le disuadió ante la incógnita del resultado de las elecciones). Ver el acuerdo de los metropolitanos sobre los sacerdotes diputados en la nota 88, punto V. Como expondremos en el capítulo relativo a la cuestión del matrimonio LOPEZ-DORIGA fue suspendido "a divinis" a consecuencia de su postura en las Cortes sobre esta cuestión.

Mas este deseo de conciliación tendría, no obstante, un límite que el Dr. FARRADO quería dejar meridiano: si afectaba exclusivamente a "todo lo que pueda referirse al orden temporal", él se ofrecía a ella pero "sin que sufra el menor detrimento la fortaleza cristiana con que, asistidos de la gracia de Dios y en cumplimiento de Nuestro deber, no abandonaremos en ningún caso lo espiritual, a Nós confiado". (**)

El Dr. Remigio GANDASEGUI Y GORROCHATEGUI, arzobispo de Valladolid, aprovechó la recepción de la nota del nuncio -para cuya publicación se editó un numero extraordinario del Boletín oficial eclesiástico de la archidiócesis únicamente comprensivo de este documento y de las palabras del arzobispo- para reiterar lo ya expuesto, y en igual tono de confianza y comedimiento, en su circular del día 18, señalando, al dirigirse a sus sacerdotes y religiosos en su breve escrito, que "sería inferirles una grave ofensa con la mera sospecha de que no habrían de ajustar su proceder en este delicado e importante caso a los deseos de la Santa Sede..." y alentando la seguridad de que igualmente harían todos los fieles católicos no sólo como tales sino también como "amantes súbditos de nuestra Patria cuyo bienestar, paz y prosperidad reclaman en las presentes circunstancias que todos respetemos los poderes constituidos y obedezcamos a

(48) 25 de abril de 1931, "Exhortación Pastoral al Clero Diocesano", BDE de Palencia, año 81, 30 de abril de 1931, núm. 9, págs. 273-279. Quince días más tarde el boletín palentino publicaría la reseña de la rogativa pública celebrada en la catedral por deseo del obispo "ante el imperativo de las actuales circunstancias", para pedir por las necesidades de la Iglesia y del Estado. En ella había pronunciado el prelado una plática sobre "los deberes más urgentes de los católicos en estos momentos", señalando el cronista que fueran muchos los fieles que acudieron "deseosos de orientación segura en medio de tanta confusión como parece haberse apoderado, aún de los espíritus más tranquilos" (s.f. BDE Palencia, año 81, 15 de mayo de 1931, núm. 10, pag. 336).

ellos para el mantenimiento del orden y para el bien comun.***

En igual forma que el arzobispo de Valladolid, suscribiria el obispo de Mallorca Dr. Jose MIRALLES Y SERT un escueto documento del que, tanto por su titulo como por la alusion que hace a que, con el, "secunda altissimos decess", cabe inferir que conocia las instrucciones emanadas del Vaticano a las que, sin embargo, no iba a referirse expresamente. Son las palabras del Dr. MIRALLES extremadamente laconicas y presentan la razon de la obediencia debida a los poderes constituidos como una "exigencia" derivada de los principios que informan el publico actuar de la Iglesia; tal laconismo y la fria objetividad con que se refiere a la actitud a asumir por los catolicos, sin exhortarles a la colaboracion, pero tambien sin frase alguna contraria a las nuevas autoridades (salvo la posibilidad de que sean "duras o discipulos"), nos induce a situar al obispo mallorquin entre los que contemplaban la nueva republica con expectativa no exenta de recelo:

"Las enseñanzas de la Filosofia escolástica y del Derecho publico cristiano exigen a los catolicos la aceptacion de la forma de gobierno introducida por el desenvolvimiento del regimen constituido como norma y garantia de la paz en los pueblos. Quiere el Divino Maestro que se de al Cesar lo que es del Cesar e inculca por medio del Apostol la sumision a los poderes supremos como enviados por Dios de quien tiene su origen toda legitima autoridad. Por San Pablo nos excita a rogar, a suplicar y a dar gracias por cuantos estan constituidos en dignidad y a estar sometidos a los superiores con toda clase de respeto aun a los mismos que son duros y discipulos, y esto por motivos de religion y por imperativos de conciencia.

(49) 27 de abril de 1931, "Arzobispo de Valladolid, Circular sobre el respeto y obediencia a los poderes constituidos", BDE DE Valladolid, año 56, 27 de abril de 1931, numero extraordinario, págs. 53-54.

«Establecido el 14 de este mes un nuevo modo de gobierno, ha de ser para nosotros obligatorio acatar a los nuevos gobernantes y prestarles obediencia para el mantenimiento del orden, para el bien común y para el logro de una paz sólida y duradera.

«Acomodándonos a estas elevadas enseñanzas, y secundando altísimos deseos, sentimos la necesidad de dirigirnos a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de esta Diócesis para exhortarles a respetar las Autoridades, obedecerlas en todo lo que sea justo y dirigir al Cielo ahincadas preces para conseguir el bien de la tranquilidad social.

«Al efecto autorizamos a los Encargados de Iglesias para hacer rogativas públicas.»⁽⁵⁰⁾

Una extensa y objetiva pastoral fue la redactada por el obispo de Avila, Dr. Enrique PLA Y DENIEL con motivo de la recepción de la nota de IEDESCHINI, si bien tal extensión no era debida a su interés por explayar su pensamiento ante las nuevas circunstancias, sino a que paso a reproducir en gran parte las admoniciones que había dictado en 1923 lo que, junto a sus alusiones a otros documentos del pasado, evidencia su deseo de demostrar con este escrito que la postura de la Iglesia permanecía invariable tanto ante los distintos regímenes políticos como en las recomendaciones que daba a sus fieles; forma indirecta de argumentar que no había razón alguna para esperar que ahora la jerarquía pudiera asumir una actitud contraria a la República y que esta debía necesariamente contar con la realidad social que aquella representaba. Se trata, pues, de un documento que,

(50) 27 de abril de 1931, "Circular XXXVII. Sobre un deseo pontificio", BOE de Mallorca, año 71, 28 de abril de 1931, núm. 5, págs. 75-76.

conteniendo, por una parte las lógicas recomendaciones a los fieles, tiene, como otra pretension principal, clarificar lo que el nuevo régimen podía y debía esperar del estamento católico. En él, de una inteligente manera, va a aludir a la dirección del voto de los fieles utilizando palabras ya pronunciadas hacia ocho años de forma que, dada la gran variación de circunstancias, no podían en modo alguno resultar sospechosas.

Así, y una vez se ha referido a la tradicional doctrina de obediencia a los poderes constituidos señalará que "es una insensatez querer desconocer a la Iglesia," porque "se daña a sí mismo el poder humano que menosprecia su eficazísima colaboración, que no ha de ser política, sino religiosa". Tal asunción del papel de la Iglesia habría de hacerse, además -y con ello la jerarquía va a aludir por vez primera al posible contenido de la nueva norma suprema de la nación y al sesgo que, con ella, pudiera darse al devenir político- al máximo nivel: "¡Ojalá no se olviden estas verdades refulgentes al estructurar una nueva Constitución para nuestra España!".

Más en prevision de que ello no sucediera y de que la nueva normativa no se atemperara a las verdades de la fe, le interesaba dejar muy claro que "En el Evangelio y en los hechos de los Apóstoles está ya la distinción de León XIII (que a tantos católicos costó mucho entender) entre el acatamiento al poder constituido y el impugnar por medios legales las leyes atentatorias a los derechos religiosos y estar dispuestos al martirio ante que a la apostasia".

El extremo que al obispo le preocupaba aclarar especialmente, como hemos apuntado, era el de la postura que cabía esperar de la Iglesia y, así, aludirá a lo injusto que sería achacarle "incompatibilidad con un nuevo régimen

porque haya guardado lealtad y haya exhortado a obedecer a otro anteriormente. La Iglesia como tal no es partidista; respeta y ama a la autoridad; no se infunda en ningun partido" y, para abundar a esta idea, pasara a transcribir literalmente lo ya indicado a los fieles hacia ocho años epoca en la que, como ahora, se habia referido a la inmutabilidad de la Iglesia ante los cambios politicos.

Mas aunque tal alusion se contuviera en el documento de 1923 no era su objeto principal tratar de la neutralidad eclesiastica, toda vez que el fin de aquel escrito era precisamente estimular al voto de los catolicos, que habian de emitir "segun el juicio de cada cual" mas "buscando el bien de la Religion y de la Patria que estriban en la paz y en el orden social". Con ello PLA Y DENIEL, sin escribir expressamente para la nueva situacion politica, reiteraba, con la suavidad con que la epoca pasada precisaba, un llamamiento al voto catolico que, aunque le daba el caracter de claro pionero en 1931, le separaba de las necesidades reales que ahora se advertian y que tan bien habia captado el obispo LUIS Y PEREZ.

Pero si el obispo de Avila tenia interes en demostrar que lo que decia en 1923 lo podia repetir en 1931, era bien consciente de que la situacion habia variado y que la actuacion de la Iglesia no podia limitarse en aquel momento a aconsejar a los fieles ejercitar activa y honestamente su derecho al voto (recordando como la Iglesia tan solo condenaba "el fraude, la venta, el elegir conscientemente al indigno y la perjudicial abstencion"); con el nuevo regimen eran los propios derechos de la Iglesia los que podian estar en juego, de ahi que tuviera que hacer una "addenda" a su anterior documento en la que, sin embargo, aun relejando su preocupacion actual por el porvenir de la iglesia, no insistira en ello con comentario politico alguno,

limitándose a apoyar su alusión con una referencia a la necesidad de oración:

"En los actuales momentos trascendentales para el porvenir no sólo de nuestra amada España, sino también de los intereses de Nuestra Santa Madre la Iglesia en nuestra Patria, es un deber de todos los cristianos insistir con fervientes oraciones y plegarias para alcanzar de Dios Nuestro Señor (...) las gracias necesarias para la Iglesia y para la Patria."

Finalizaría el prelado su cautelosa pastoral con la consabida recomendación al clero en punto a abstenerse de toda lucha partidista así como a mantener "buenas relaciones" con las autoridades civiles, tal como también había recomendado tanto en 1920 como en 1924.⁽⁵¹⁾

Aunque en la pastoral del Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE, obispo de Salamanca, solo exista una velada alusión a las instrucciones del Vaticano con la que, tras referirse al acatamiento debido a los poderes constituidos, señalara a sus diocesanos que, actuando en la forma que indica, les asegura "como suprema garantía de vuestro acierto en proceder semejante, la complacencia de la Santa Sede", tal alusión en la fecha de su escrito nos inclina, aun moviéndonos, como en otros casos, en el terreno de la hipótesis, que sería preciso contrastar, a incluir este documento entre los escritos una vez se hubo recibido por la jerarquía española la carta-circular del nuncio.

(51) 27 de abril de 1931. "Exhortación pastoral sobre el respeto y obediencia debida a los poderes constituidos, el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos católicos y ordenando preces por el bien de la Patria", BDE de Avila, año 42, 29 de abril de 1931, núm. 4, págs. 173-183.

Es la pastoral del Dr. FRUTOS un documento sencillo, sin pretensiones de honduras filosóficas y lleno de un positivo e ingenuo optimismo ante los hechos, que en nada cuestiona; su principal objeto radica en exhortar a clero y fieles acerca de que el cambio de régimen no ha de modificar la acción apostólica a desarrollar en la diócesis, tanto por los sacerdotes como a través de la Acción Católica de los seglares.

Comenzaba el obispo indicando a sus fieles como deseaba comunicarse con ellos a fin de poderles transmitir luz y aliento, para lo cual quería hacerles comprender que "después del cambio trascendental producido en la gobernación de la cosa pública en nuestra querida Patria," debían bendecir la providencia divina, pues todo era ordenado por ella para su bien y ella era quien señalaba a las naciones los gobernantes que las dirigían a fin de que se cumplieran los destinos providenciales. Tal pensamiento, decía, pertenecía a la fe católica "y aun entra en los postulados de una recta filosofía natural"; lo cual también acontecía "con la doctrina que nos enseña el acatamiento y la subordinación a los Poderes establecidos."

Hacia a continuación una glosa a la necesidad de la autoridad en toda sociedad civil, autoridad a la que todo el cuerpo social debía obedecer "con sinceridad y verdad" y la cual estaba bajo "el deber gravísimo de procurar el mayor bien posible a todos los ciudadanos en el seno de la sociedad" Ello era suficiente para justificar su "anhelo vivísimo" de que todos sus diocesanos guardasen "al Gobierno que se constituyó el día 14 del mes corriente y a los que en lo sucesivo se constituyeren los máximos respetos y acatamientos", además, a los católicos impelía a actuar así las enseñanzas evangélicas y la doctrina pontificia.

El era, pues, el primero en desear practicar "esta subordinación perfecta, consciente, sentida inclusive al calor sobrenatural", que quería ver también practicada por todos sus diocesanos, "ahora como antes, y por todos los días de nuestra vida, para con el Poder Civil y con todos los Poderes a que estamos sometidos"

"Incluyese en ella la fidelidad en el pensar, sentir y proceder rectamente acerca de cuantas personas encarnan la Autoridad y tienen por ello la procura de nuestro bien y la ardua responsabilidad de nuestro gobierno; como también supone el deber de la cooperación, que de consuno reclaman ya la misma dignidad del Poder público, ya la alteza de la función que ejerce, ora el derecho de la colectividad y el bienestar de nuestro prójimo, a quienes basta por mandato divino nos debemos, y aun la propia conveniencia, pues además de que a todos el bien de la comunidad deriva y alcanza, será siempre la escrupulosidad en el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas el más poderoso título con que pedir sean mantenidos nuestros derechos y salvaguardados ideales e intereses de espíritu, primeros siempre y máximos para nosotros, por referirse al fin último y a la gloriosa e inacabable ciudadanía del Cielo."

Nada de cuanto decía tenía que ver con la política, ni con las teorías relativas a las formas de gobierno; era la doctrina permanente de la Iglesia, que, abocada a un fin más alto, alcanzaba este en uno u otro régimen, siendo la gran propulsora de la civilización y el progreso humanos.

Por ello encarecía a todos "el mayor respeto y la obediencia ejemplar a las autoridades del Poder constituido", debiendo todos, y especialmente los sacerdotes, prestar "su sincera aportación para el bien patrio", lo cual hacían especialmente cifándose con exclusividad y fervor a su ministerio y cuidando de que todas las obras de apostolado se situaran siempre "fuera y por encima de la política", singularmente en aquello que afectaba a la predicación y

catequesis -donde ni remotamente debería aludirse a asuntos ajenos a ellas- y a lo que atañía a las obras de la Acción Católica, entre las que enumeraba, en un estilo muy distinto al que mas adelante veremos en la pluma del Dr. GOMA, las relativas al "acercamiento de las clases sociales y las justas reivindicaciones de las preteridas".

Tal proceder hacia impensable desercion alguna ni decaimiento en el apostolado, toda vez que los católicos no vinculaban a ninguna persona, "ni a institución alguna por secular y respetable que sea, la empresa de la Cruz... ni la caridad que nos lleva junto a los hermanos y prójimos" (clara alusión a la monarquía, cuyo derrocamiento no podía apatir a los creyentes ni hacer cambiar su actitud).

Así, la sobrenaturalidad del fin perseguido "y la verdad misma del acatamiento que a los Poderes constituidos tributamos" habia de probarse con la continuidad de la acción en el apostolado, con confianza en Dios y también "en los que gobernandonos le representan", y ello porque:

"Claman las necesidades sociales, no desde unos meses, sino de varios años a esta parte, especialmente desde la tristísima conflagración europea, por una acción evangelizadora de paz y de bien, de luz y de amor, que restablezca el orden moral, reafirme los valores eternos, mantenga los cuerpos, ocupe los brazos y las mentes, estreche en santa fraternidad los corazones, y oriente a las almas hacia su destino eterno, sin el cual ni el hombre se comprende, ni la vida social es explicable. ¿Quién, ante tal clamor, renunciaría al apostolado? Por Cristo y por España, os conjuramos que ni uno de vosotros lo abandone."

Concluirá el obispo exhortando a todos a la oración con el fin de impetrar de Dios: "Luces, gracias y aciertos para los gobernantes. Paz y prosperidad, en florecimiento de

justicia y caridad verdaderas y cristianas, para España. Fidelidad hacia el y hacia la Santa Iglesia, y ciudadanía y patriotismo ejemplarmente practicados, para el Prelado, el Clero y el pueblo de la Diócesis de Salamanca."

Dignas de destacar son las recomendaciones expresas que hizo el Dr. Antonio GARCÍA y GARCÍA, obispo de Tuy, como continuación de una pastoral en la que se limitó a explicar, según la tradicional postura eclesial, las instrucciones recibidas del Vaticano. Encierran estas recomendaciones una positiva llamada a la colaboración con las nuevas autoridades, una consciente valoración de los críticos momentos que, tanto política como religiosamente, se vivían y un canto a la esperanza de que una recta actuación presidida por el espíritu de concordia conduciría al triunfo de la Iglesia. Así, su primera recomendación es un sincero llamamiento al entendimiento en el que pone como ejemplo su personal actitud:

"18. Recomendamos a todos nuestros amadísimos Sacerdotes y Religiosos de esta Diócesis, aunque no lo estimamos necesario, que sin bajezas y servilismos, guarden las consideraciones más leales y cordiales a las personas investidas de autoridad, procurando con todo empeño vivir con ellas en perfecta armonía, para mantenimiento del orden y para el bien común de los pueblos, de la provincia y de España. Por lo que a Nos toca, Nos complacemos en hacer pública las buenas relaciones que desde el primer momento hemos mantenido con las nuevas autoridades, que justo es consignarlo, se apresuraron a ofrecer sus respetos a la Autoridad episcopal con ofrecimientos que muchísimo hemos agradecido y a los que hemos correspondido y procuraremos siempre corresponder."

El segundo consejo aludía a la necesidad de que el clero fuera portador de la paz ante "los vientos que soplan o rugen (quel son de lucha o discordia", siéndole preciso advertir que:

"...muchas veces lo que separa y divide y enemista, son apreciaciones varias en asuntos en los que por ser meramente políticos, es lícito opinar muy diversamente, a veces muy contrariamente. Respetemos esta libertad política y enseñemos a respetarla y apaciguemos los ánimos para que no se enciendan por esta diversidad de opiniones y tendencias meramente políticas."

Recomendaba el prelado, en tercer lugar, que los sacerdotes se dedicaran con todo celo a su ministerio, "ahora más que antes porque es innegable que algunos quieren combatir con más fuerza ahora que antes la vida cristiana... mal que amenaza o ya descarga"; contra ello entendía el prelado (y pasaba así a aludir a una de las carencias del catolicismo español de la época, que veremos reiterada por el resto de la jerarquía) que el mejor remedio era una más intensa predicación del evangelio y de la enseñanza del catecismo a adultos y niños, "cuidando de no mezclar en la explicación religiosa ni temas profanos ni reflexiones políticas ni alusiones o indirectas de carácter político o personal."⁽⁵³⁾ Su labor, pues, había de ser esencialmente espiritual frente a todas las almas, "sean cuales fueren las opiniones políticas que sostengan o el partido político a que pertenecieren, pues todos pueden salvarse con tal que estén dispuestos a cumplir los Mandamientos de la Ley Santísima de Dios y los Mandamientos

(53) En bastardilla en el original.

de la Santa Iglesia", frase con la que el obispo, exponiendo la clásica doctrina que apuntaba a la imposibilidad de salvación fuera de la fe católica, venía a excluir implícitamente de la atención sacerdotal a un amplio espectro de militantes políticos.

La cuarta y última recomendación irá dirigida a los fieles insistiendo también en la obediencia a los nuevos poderes así como en el deber de avivar su religiosidad, para que "con su conducta, en palabras y en obras, demuestren que son los mejores ciudadanos", ideal planteamiento que, a diferencia de otros de sus hermanos en el episcopado, no intuía la posibilidad de los legítimos roces que inmediatamente iban a producirse. Especial llamada haría en este punto a los miembros de la Acción Católica exhortándoles a incurrir en todos los ámbitos (enseñanza del catecismo, difusión de buenas lecturas, beneficencia con pobres y enfermos, formación católica de la juventud... "en la defensa de la familia y de la escuela, en la preservación de los obreros de los peligros que atentan contra su fe") los principios de la actuación cristiana, ya que, para el prelado, con esta paternalista y bienintencionada visión, necesario era unir al respeto y obediencia a las nuevas autoridades "una actividad religiosa extraordinaria", aunque no dejase vislumbrar ningún motivo de inquietud realmente novedoso que exigiera o hiciera urgente tal actividad.

Insistiría, por último, en la necesidad de la oración y acabaría señalando que "orando así y trabajando así, estemos seguros de que la vida de la Iglesia será próspera, y próspera será la vida de España, conforme a los designios misteriosos de Dios," en cuya providencia, que permitía esos "acontecimientos tan graves de España en la hora presente",

hacia que abandonarse, cumpliendo "lo que a nuestro deber de buenos católicos y buenos españoles corresponde".¹⁵⁴

El mismo día en que el obispo de Tuy suscribía esta pastoral, indicaba el Dr. Isidro GOMA que el tiraje excesivo del boletín de su diócesis que publicaba la carta del nuncio, le impedía comentar las instrucciones vaticanas. Es de suponer, sin embargo, que la prolija pluma del futuro primado de España deseaba tiempo suficiente para comentarlas con su acostumbrada extensión y, así, su pastoral sobre el cambio de régimen no vería la luz hasta mediados de mayo, fecha en la que, además, ya pudo referirse detalladamente a las inmediatas elecciones y orientar a los católicos sobre ellas. De esta forma, las palabras que redactó glosando la nota de la nunciatura se limitaron en este primer momento a exhortar al acatamiento a estas disposiciones y a anunciar a clero y fieles su personal desarrollo de las mismas: mas, no obstante lo sucinto de este primer comentario, se deduce ya de él, y en línea con la carta enviada a VIDAL en 15 de mayo, una negativa actitud ante la República por cuanto, tras señalar el deber de obediencia a las palabras del papa indicara que "... el Supremo Pastor nos ha dado a los españoles en momentos graves para la querida patria, una norma precisa, en punto vivo y tal vez en circunstancias costosas".¹⁵⁵

(154) 15 de abril de 1931, "Exhortación Pastoral sobre el respeto y obediencia debida a los Poderes constituidos y actividades apostólicas que debe desplegarse", BGE de Tuy, año 72, 30 de abril de 1931, núm. 6, págs. 177-184.

(155) 29 de abril de 1931, "Circular sobre el respeto y obediencia a los poderes constituidos", BGE de Tarazona y Tudela, año 69, 30 de abril de 1931, núm. 682, págs. 339-341. En unión de estas recomendaciones el obispo, siguiendo los dictados de la circular de SEGURA, establecería rogativas solemnes "por las necesidades de la Iglesia y de la Patria... en las presentes circunstancias", a celebrar conjuntamente con otros actos religiosos, y de las que el boletín diocesano destacó en la oportuna fecha la concurrencia de fieles (BGE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de mayo de 1931, núm. 664, págs. 423-425).

La pastoral que el arzobispo de Sevilla, Dr. MUNDAIN, escribió el 30 de abril, se limitó a ser un extenso comentario, lleno de objetividad, de las normas de la Santa Sede en el que exponía ampliamente la doctrina de la Iglesia respecto al orden político sobre cuya evolución no dejaba traslucir ninguna desconfianza:

"Consecuente la santa Iglesia con su misión moralizadora y de paz, inculca a sus hijos el cumplimiento de los deberes sociales y cívicos, especialmente respecto de los que ejercen las funciones de la Autoridad en las sociedades civiles, sean imperios, sean Repúblicas, sea cual fuere la organización política de cada Estado. Deja incólumes a los miembros de cada Nación sus derechos políticos, y se mantiene ajena a la determinación de la voluntad de cada Estado, salva la justicia y honestidad, en lo referente a su forma de régimen; advirtiendo a todos la obligación de conformar sus actos a las normas y preceptos de la sana moral, el amor debido a la patria común, que es una segunda madre en el orden humano; la sumisión a las leyes justas; y, si alaba a sus mártires que prefirieron obedecer a Dios antes que a los hombres cuando estos exigían algo en pugna con la ley de Dios y derechos de su Iglesia, también glorifica a los ciudadanos que en defensa de su patria y en servicio de su Nación sacrifican su vida o las sirven con lealtad y dan ejemplos de virtud abnegada y perfecta."

Tras estas palabras dictara sus concretas normas de actuación (acatamiento al nuevo gobierno, "obediencia a las leyes y decretos del Poder público que no estén en oposición a las leyes divinas o a los derechos de la Iglesia", moralidad en la vida privada y pública...) entre las que destacan su preocupación por "el mejoramiento de la condición económica del menestral, sin utopías absurdas, pero con espíritu de verdadero amor al prójimo y compasión de sus males", frase en la que, como se ve, el prelado rechaza no sólo las pujantes doctrinas marxistas y anarquies-

tas sino cualquier concepto de reivindicación de clase sustituyendola por un amor al proximo de clásicos visos paternalistas.

El arzobispo aprovecharia tambien esta ocasion para instar a los catolicos a que ejercitasen el derecho de sufragio, "usando de este según las normas de la moral cristiana, para que sean elegidos el mayor número posible de sujetos dignos dispuestos a procurar el bien de la religion y de la Patria". De esta manera se situaba en una linea moderada muy semejante en su forma y en su fondo a la seguida por el obispo de Avila y distinta de las exhortaciones del de Oviedo, en la que, curiosamente, mas parecia insistirse en que los catolicos no practicasen la abstencion y en que no permitieran usar metodos fraudulentos que en la necesidad de la unidad de voto, como si el pensamiento eclesiástico siguiera anclado en coordenadas propias del siglo anterior, mas prolijo en técnicas de "pucherazo" y debates al fin favorables al altar, que en ejemplos contrarios.***

A continuacion, y dirigiendose especialmente al clero, le recomendaba, como no podia ser menos, sustraerse de ingerencias politicas en el ejercicio de su ministerio, mantenerse "en los limites de una sana prudencia en sus actos de ciudadania" y abstenerse de alusiones politicas en la predicacion, actuando en todo "con tal dignidad y prudencia" que merecieran la confianza y el respeto de los fieles.

(86) Sobre la situacion de la Iglesia española en el XIX ver: CASTELLÓ, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio juridico-administrativo, 1767-1868*, Madrid, 1973; LUENCA TORIBIO, José Manuel, *Estudios sobre la Iglesia española del XIX*, Madrid, 1973 y PETSCHEN, Santiago, *Iglesia-Estado. Un cambio politico. Las constituyentes de 1869*, Madrid, 1975.

A estos volvía a referirse, por último, una vez terminadas las recomendaciones, para insistirles sobre la necesidad de que fueran conscientes de la gravedad de las circunstancias, reiterándoles que no mancharan su conciencia "por omitir lo que Dios y la Santa Madre Iglesia piden de nosotros para el bien de todos" y encareciéndoles a rogar por las nuevas autoridades, a fin de que, en medio del orden, consiguieran la prosperidad de la nación "sin mengua de nuestra religión, que es base de la verdadera grandeza de los pueblos."⁵⁷

El propósito de la pastoral suscrita a primeros de mayo por el obispo de Málaga, Dr. Manuel GONZALEZ GARCIA era, según decía, transmitir a sus fieles dos encargos de la Santa Sede. Se refería el primero a la celebración del XV Centenario del Concilio de Trento y el segundo, expresado con tintes de singular pesimismo, a la necesidad de recordar la doctrina de la Iglesia ante las diversas formas de gobierno, "de modo singular con ocasión del cambio de régimen político obrado en nuestra Patria y que en unos han puesto exaltación de delirio y en otros depresiones de agonía".

Según la doctrina eclesialística todos tenían la obligación "de respetar los poderes constituidos y de obedecerlos para el mantenimiento del orden y para el bien común", siendo la mejor forma de cumplir estos fines, en primer lugar la oración y el recto cumplimiento del ministerio religioso por parte de los sacerdotes así como su unión al prelado y, respecto a los fieles, la unión con Dios y con la Iglesia, ya que:

(57) 30 de abril de 1931, "Exhortación Pastoral", BOE de Sevilla, año 71, 2 de mayo de 1931, núm. 1180, págs. 177-184.

"En estas horas de angustias y zozobras en vez de lamentos y pesimismo; cuanto mas os valdria hacer un buen examen de conciencia sobre vuestros deberes de catolicos, de ciudadanos, de padres o hijos de familia seguido de un sincero arrepentimiento de las faltas cometidas y de un valiente proposito de la enmienda."

De ahí que todos debieran esforzarse en el cumplimiento de sus deberes personales, punto clave, para el Dr. GONZALEZ, para lograr el bien de España; deberes en los que el prelado, con un tradicional entendimiento de las costumbres muy por encima del de la mayoría del episcopado, incluía los relativos a la justicia y la caridad "para con Dios y su Iglesia, para con la patria y sus gobernantes, para con la familia y los subordinados, para con la moral pública y privada, para con la prensa que saca la cara por Cristo y por el orden y la paz de Cristo", insistiendo muy especialmente en los puntos que él entendía como básicos de esa moral, cuyo cumplimiento alcanzaría, nada menos que la paz social y acabaría "los odios revolucionarios y las amenazas de los inquietos".⁽⁵⁸⁾

(58) La singular visión del prelado nos lleva a reproducir sus palabras aunque excedan de una estricta opinión ante el cambio de régimen político:

"Vistan las jóvenes y mujeres católicas a lo cristiano, que es vestir a lo decente, absténganse de bailes agarrados, de cines peligrosos, de novelas enloquecedoras, de exhibiciones y promiscuaciones, que ni los paganos tuvieron, en playas, tertulias y deportes, y estoy cierto de que el milagro de la paz social se obra rápidamente. Acébase tanto desafío de la ira de Dios, y tanta provocación a la paz y a la pureza de las almas como son esos baños de sol en las playas, tan funestos para los cuerpos como para las almas de gentes que oyen Misa y comulgan, y esos discursos y audacias en el hablar, en el vestir, en el tratar, en el vivir, esas idolatrías de la carne perfumada y pintada a costa de la salvación del alma y la salud del cuerpo, de la pureza de las costumbres, de la economía doméstica, de la paz del hogar, de la felicidad de la vida, del cariño bueno a los padres, a los hijos y a los pobres... acébase rápidamente ese horrendo espectáculo de paganismo insolente que vienen dando los pueblos cristianos, con corazón contrito de los que pecaron o cobardemente dejaron pecar y con propósitos energéticos de saludable austeridad cristiana, y los odios revolucionarios y las amenazas de los inquietos y las maquinaciones de los que conspiran en las sombras se desvanecerán como se desvanecen las tinieblas de la noche al despuntar la aurora de un claro día."

De esta forma las amenazas de la justicia divina -que, según el prelado, azotaban a España- podrían ser detenidas:

"Tanta fe tengo en la eficacia para el bien y la paz social del cumplimiento leal de sus deberes de un grupo mayor o menor de católicos, que estoy cierto de que Dios apartaría el azote de su ira de sobre nuestras espaldas el día en que solo las costumbres de la masa católica dejaran de ser paganas, como desgraciadamente lo van siendo."...

A continuación de esta pastoral publicaba el mismo boletín, firmado por el canciller diocesano, un encargo del obispo recordando a todos los sacerdotes las normas eclesásticas sobre predicación, las cuales transcribía en latín ("Queda total y absolutamente prohibido a todos los sacerdotes tratar de política en la Iglesia")....

También el obispo de Lugo y administrador apostólico de Mondoñedo, Dr. BALANZA, se vio obligado a aludir, nueva y específicamente, al cambio de régimen una vez recibidas las instrucciones de la Santa Sede, si bien en el escueto escrito que redactó el 3 de mayo, se limitó a reiterar la necesidad de oración y a indicar que los católicos guardaran "los debidos respetos a las autoridades seculares, y colaboren con ellas por los medios que les son propios para la consecución de sus nobles fines de orden, paz y prosperidad de la Patria". Este escrito, en el que, sin em-

(59) 1er viernes de mayo de 1931, "Instrucción Pastoral, Honor a la Madre de Dios y paz a la Madre Patria", BOE de Málaga, año 64, 15 de mayo de 1931, núm. 6, págs. 157-164. Tras el texto de la pastoral figura un "post scriptum" indicando que no había podido ser publicada en la fecha prevista por la ola de incendios. Tema al que aludimos en el epígrafe correspondiente de este capítulo.

(60) 1 de mayo de 1931, "Monita" Ibid, pag. 165 ("Concionatoribus tabere omnibus de re politica in ecclesiis agere omnino et absolute sit vetitum").

pargo, no se contenia alusion alguna a las recomendaciones vaticanas, acababa ordenando a los sacerdotes se abstuvieran de mezclarse en las luchas politicas y que en la predicacion no hicieran jamas referencia "sea directa o indirecta, al actual estado de cosas ni a personas particulares" instandolos a organizar "frecuentes rogativas publicas" por "la paz y la prosperidad de la Religion y de Espana".¹⁶⁷

2. Las exhortaciones de la jerarquia con motivo de las elecciones a Cortes constituyentes.

2.1. La pastoral del cardenal Segura de 1 de mayo.

Atencion aparte en el analisis de las actitudes y reacciones de la jerarquia catolica espanola ante la republica, merece, sin lugar a dudas y como todos los autores han puesto de manifiesto, la postura del cardenal SEGURA.

Como hemos señalado fue uno de los primeros prelados que se dirigio a los fieles, ya el mismo 18 de abril, para aludir al cambio de regimen en unos terminos harto significativos; tambien fue el primero que, por su calidad de primado, se comunico con el resto del episcopado para darle instrucciones respecto a lo que habria de hacerse en

(167) 3 de mayo de 1931, "Circular, Por las necesidades actuales de la Patria", BOE de Mondofredo, año 74, 6 de mayo de 1931, núm. 5, págs. 77-78.

estos primeros días; fue igualmente el primero en recibir, por su actuación, las iras de los anticlericales, según hemos apuntado al referirnos al telegrama que el cardenal VIDAL dirigió a ALCALA JAMURA el 26 de abril y en el que aludía a la "campana injusta contra el Cardenal de Toledo".

Conocida era en España la amistad que, desde que en 1916 se conocieran en Londres y especialmente desde el viaje real a las Hurdes en junio de 1922, unía a ALFONSO XIII y al cardenal SEGURA, amistad que propició sin duda el nombramiento del joven obispo de Coria como arzobispo de Burgos para pasar, en poco más de un año, a detentar el primer lugar de la jerarquía eclesiástica española como primado de Toledo.

No cabe duda que esta amistad tuvo mucho que ver con las iras que muy pronto desencadenarían los elementos más extremistas contra el cardenal, abstracción hecha, claro es, de la propia actitud de SEGURA demasiado inmersa en una cultura harto tradicional, uno de cuyos principales ejes era la secular doctrina de la unión del trono y el altar como elemento clave del bien moral y la grandeza de los pueblos.⁶²

(62) Sobre todos estos datos y la personalidad de Segura cabe referirse a la dudosa versión de Ramón BARRIGA: *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977 y al comentario que le dedica Antonio RAMOS OLIVEIRA: *Historia de España*, México, 1952, III, pág. 127. Escuetas son las referencias de MONTANOLA: "Vical y Barraquei, el cardenal de la paz", y también, ajen de poco rigurosas, las de GRANADOS: *El cardenal GOMÁ, primado de España*, Madrid, 1969, pág. 44 y ss. Una descripción del integrismo del cardenal en el marco de sus relaciones con el Grupo de la Democracia Cristiana, en BENAVIDES, D.: *El fracaso social del catolicismo español*, Arboleya Martínez, Barcelona, 1977, págs. 393-456.

La union de todos estos elementos desencadenarian una campaña contra el primado, que no escatimó caricaturas, criticas y exageraciones de su actuación en la prensa más radical, y que tuvo como muy pronta consecuencia la drástica intervencion del gobierno provisional, precisado de atajar la que se vislumbraba como beligerante actitud del prelado.

El primer roce oficial lo produjo el rumor de que el cardenal habia pronunciado en una de sus famosas sabatinas unas frases contrarias a la Republica y leído una carta que, aun sin revelar su firma, se atribuyo por muchos a ALFONSO XIII. A este hecho y a las declaraciones oficiales aludiria "El Debate", señalando que el gobierno reconocia que "las palabras que se han atribuido al Primado no fueron pronunciadas", aunque, a pesar de ello añadiría el periodico- se habia enviado una nota a la Santa Sede. El motivo de la noticia radicaba en las declaraciones hechas por el ministro de Justicia a los periodistas el dia anterior, en las que se reconocia que del asunto de las frases atribuidas al cardenal en la ultima conferencia sabatina "se ha hablado mucho estos dias".¹³³

(52) Así recogia "El Debate" las palabras del ministro de Justicia:

"El Gobierno ha hecho una información minuciosa, y los testimonios coinciden en afirmar que las palabras que se han atribuido al Cardenal Primado no fueron pronunciadas por él, pero existen algunos testimonios que afirman que el Cardenal Primado tuvo expresiones que pudieron dar motivo a que se creyera habia un propósito político que subrayaba su discrepancia con el régimen actual.

"El Gobierno no tiene por qué entrar en mayores esclarecimientos, cree que ha hecho lo que debia hacer y se ha limitado a llamar la atención al Muncio de su Santidad en los siguientes términos:

"Al Gobierno han llegado noticias contradictorias sobre palabras pronunciadas por el Cardenal Primado en la última conferencia sabatina. En vista de ello el Gobierno Provisional de la Republica hace saber al Muncio de Su Santidad que está seguro de que Roma, respondiendo a su reiterada actitud de acatamiento a los poderes constituidos, no amparará ni permitirá actitudes que de otra parte resultarían incongruentes, felizmente, con las observadas por casi todas las autoridades eclesíasticas y el clero español.

"El Gobierno, por su parte, tampoco podrá consentir, por motivo de deber, que pudieran prevalecer en ningún caso rebeldías inadecuadas". ("El Debate", 26 de abril de 1931).

Seguía señalando el periódico que en la información facilitada por Fernando DE LOS RÍOS se había insistido en que en la sabatina "hubo lectura de una carta, cuya firma no se leyó", y que si bien no parecía exacto el que el cardenal hubiera pronunciado las palabras que se le atribuyeron, la lectura de esta carta junto a algunas expresiones, "que dieron origen a que se le atribuyese un carácter político a esa conferencia", motivaron que el Gobierno entregara la nota al Nuncio, "no por lo que ha sucedido, sino por considerar que es una obligación velar porque las cosas no pasen a mayores".***

(54) No es fácil, sin embargo, dilucidar el motivo concreto y la fecha exacta del inicio de la campaña contra el primado. Solo nos consta que esta era anterior a la instauración de la República y que se incrementó a partir de 14 de abril. Así, el boletín eclesiástico de Toledo que, tras la detención del cardenal SEGURA se refirió a esta campaña -y en cuyo relato se basa GRANADOS, según manifiesta, la remonta a la época de la dictadura de PRIMO DE RIVERA, señalando cómo se arreció al proclamar la República, e insistiendo en las acusaciones contra el cardenal a raíz de la sabatina a que nos hemos referido y calificando de poco perspicaces a las personas que habían creído que la carta leída en ella era de Alfonso XIII. (Por el valor testimonial de esta versión eclesiástica de los hechos incluimos este documento en el Apéndice núm. 15). También Ramón GARRIGA alude, por una parte, a una campaña iniciada por los socialistas contra el primado a finales de 1930, en la que se le presentó como "modelo de prelado intransigente", y, por otra, vuelve a referirse al comienzo de "una formidable campaña" por los anticlericales a raíz de la pastoral de 1 de mayo (Vid: GARRIGA, Ramón, *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona 1977, págs. 140-142 y 157-159). Dejando al margen que esta es obra que, como ha señalado CUENCA TORIBIO, no es recomendable para un análisis riguroso de los acontecimientos, moviéndonos más en la línea del impacto periodístico que en la de la exactitud histórica, es preciso que apuntemos que el autor citado indica que GARRIGA reproduce gran parte de la pastoral, cuando lo cierto es que se limita a transcribir el párrafo en que el cardenal se refirió a la monarquía y a la figura de Alfonso XIII; por otro lado añade el profesor CUENCA que el tema de la indicada pastoral aún suscita hoy controversias, remitiéndose como versión más extendida a la de TUSQUETS, J. *Orígenes de la revolución española*, Barcelona 1932, págs. 103-109. Estos comentarios e incluso la propia y poco exacta versión de CUENCA cuando indica que en su escrito el primado "remitió a las anunciadas Cortes Constituyentes la definitiva forma de Estado", nos obliga a reproducir íntegro el debatido documento en el apéndice, como

No es de extrañar que, como de las manifestaciones de Fernando DE LOS RÍOS se desprende, algo hubiera en las frases emitidas por SEGURA; al leer su circular de 15 de abril es fácil vislumbrar la actitud del cardenal ante el nuevo régimen y, de ahí, que sea posible intuir un tono similar en sus siguientes intervenciones, tono en el que sino un frontal rechazo si había, al menos, una velada postura contraria. Sus nuevas palabras, al ser pronunciadas ante numerosos fieles (proverbial era el éxito de las predicas del arzobispo) tendrían mayor resonancia que las que habían aparecido días atrás en el boletín diocesano, que pasaron entonces desapercibidas o, al menos, no tuvieron el amplio eco que tendrían las ahora proferidas directamente

señalamos más adelante. (Sobre los extremos indicados ver CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea 1833-1985*, Madrid, 1985, pag. 26).

Como resumen de cuanto antecede cabe apuntar que la campaña contra el cardenal era anterior a 1931 y que se arreció al comienzo de la República (razón de la petición de VIDAL a ALCALA ZAMORA el día 26 de abril) por las palabras que, con motivo o sin él, se le achacaron como pronunciadas en sus conferencias sabatinas y que tuvo su culminación a raíz de la pastoral de 1 de mayo cuyo punto algo no estaba representado ni por ataques directos contra la República ni por las orientaciones a los católicos ni, mucho menos, porque tuviera una forma "violenta" sino, únicamente, por su extemporáneo y poco político elogio de la monarquía. En tal sentido y como en la nota siguiente abundamos entendemos que el comentario más ajustado es el del biógrafo de VIDAL, MUNTANYOLA, que se limita a destacar que en la pastoral SEGURA "no disimulaba su entusiasmo por la monarquía derrocada", añadiendo seguidamente que "... fue considerada por los republicanos como un acto hostil al régimen" (MUNTANYOLA, Ramón, *Vidal i Barraquer, el cardenal de la paz*, Barcelona, 1971, pag. 189). No queremos dejar de indicar, por último, y habida cuenta del contenido de los documentos del resto del episcopado hasta aquí examinados, que la consideración a que alude MUNTANYOLA vendría tanto de este epígrafe concreto de la pastoral como de la relevancia de la figura que la suscribió, sin olvidar los antecedentes que rodeaban su actuación.

por el prelado, aunque sea plausible suponer que, difundidas por los sacerdotes desde el púlpito,¹⁶⁵ fueron la primera llamada de atención para comenzar a recelar de la actuación del cardenal ante la República.

Estimamos que esta y no otra fue la causa de la intervención del gobierno, a fin de evitar, como se dijo, "mayores males", y dado que, según las noticias que iba recibiendo, no todos los obispos, -como ha quedado claramente recogido en las páginas anteriores- aludían con igual convencimiento al acatamiento debido a los poderes constituidos, a pesar que en el comunicado oficial se señalara, lógicamente, lo contrario.

Tras esta resena recogía "El Debate", bajo el titular "Protesta de la Asociación Diocesana" una nota publicada en el diario "El Castellano" por la asociación del clero de Toledo y en la que, aparte de la incondicional obediencia al cardenal que expresaban sus sacerdotes, exaltaban sus virtudes, atribuyéndole, entre ellas, la de la "prudencia exquisita", como clara manifestación contraria a los rumores sobre sus palabras, virtud esta que muy prontamente sería cuestionada, incluso por sus mismos hermanos en el episcopado, dado el camino que SEGURA iba a emprender. Los sacerdotes se dirigían también incluso a acudir a los tribunales en defensa del cardenal cosa que, ante el desa-

(65) Tras la circular del día 16 figuraba el consabido "Lease al pueblo fiel",

rollo de los acontecimientos llegaron a hacer.⁶⁶⁶

(66) "Ante la persistente y sistemática campaña difamatoria y calumniosa que una parte de la prensa española, llena de prejuicios seculares, viene haciendo contra el eminentísimo Cardenal Primado, la Asociación diocesana del Clero de Toledo, legalmente constituida, en nombre de los quinientos cincuenta socios que la integran, ha acordado en Junta general celebrada el día 24 del actual, lo siguiente:

«12. Renovar a su Excsa. Reverendísima el testimonio de la más absoluta adhesión y de la obediencia incondicional.

«22. Reprobar la conducta inculcable de los que, siendo incapaces de admirar, y mucho menos de imitar las excelsas virtudes de caridad, heroísmo, celo infatigable y prudencia exquisita del Cardenal Primado, se rebajan haciendo relucir la vil arma de la calumnia para manchar, si tanto pudieran, una vida que se puede ofrecer como derchado de virtudes a todos los católicos, a todos los buenos españoles.

«32. Defender a nuestro Prelado por todos los medios legales, y si preciso fuere, acudir a los Tribunales de Justicia contra las calumnias e injurias lanzadas.

«42. Publicar un folleto que se repartirá gratis a todos cuantos lo deseen, en el que se dé cuenta del acuerdo de adhesión a la obra caritativa y apostólica del Sr. Cardenal." ("El Debate", 26 de abril de 1931).

Como continuación de esta nota y ya en 10 de mayo -es decir una día antes de la ola de incendios que provocó la huida del primado y la víspera del cierre del periódico, que duraría nueve días- daría cuenta "El Debate" de la visita de una comisión de capitulares de la catedral primada para expresar su incondicional adhesión a la actitud y doctrina del cardenal y de la remisión por la asociación del clero de Toledo de un documento, que publicaba íntegro, y en el que, en contra de la campaña desatada por la prensa de izquierdas contra SEGURA, daban cuenta de la publicación del folleto anunciado y titulado "Labor Apostólica del Cardenal Segura y Saenz, expuesta por su Clero" y hacían un panegirico de las actividades desplegadas por el primado desde su acceso a la sede toledana, ("El Debate", 10 desde de mayo de 1931).

Entre una y otra publicación el periódico, siguiendo la línea de orientación a los fieles ante las próximas elecciones, que la jerarquía esbozaba, había publicado un editorial en el que, bajo el expresivo título "Un gran sacrificio colectivo", instaba a sus lectores a "defender a España... y a nuestros bienes materiales y espirituales...", añadiendo que el resultado positivo de tal defensa dependería del acierto con que se organizaba la campaña y se hiciera la propaganda para elegir las Cortes constituyentes el día 21 de junio, pues tales Cortes serían las que fijarían el porvenir de España durante cuatro o cinco años ("El Debate", 28 de abril de 1931).

Más adelante, ya en 1932, aparecería un libro titulado "El Cardenal Segura"; prologado por Ramiro de Maeztu, en el que su autor, Jesús Requero San Román relatado y comentaba la campaña contra Segura realizada por parte de la prensa al objeto de contrarrestarla. A esta obra aludieron, entre otros, los boletines eclesiásticos de Toledo (año 88, 16 de abril de 1932, núm. 8., págs. 128-129); Barcelona (año 75, 30 de junio de 1932, núm. 12, págs. 264); Burgos (año 75, 3 de julio de 1932, núm. 14, págs. 253-254) y Granada (año 87, 1 de agosto de 1932, núm. 3506, págs. 197-198). El boletín eclesiástico de

El documento que, tras estos hechos salió de la pluma del primado inducía a pensar que éste iba a rectificar sus expresiones y a silenciar sus indirectos comentarios. En efecto, la pastoral del día 30 de abril fue -a diferencia de las de otros preladados sobre el mismo tema- de único y exclusivo matiz religioso, sin la más mínima frase que pudiera encerrar un doble sentido de carácter político.⁽⁶⁷⁾

Pero era difícil que el temperamento de SEGURA pudiera ceñirse a tal actitud: mientras se dirigía a sus fieles para ensalzar las excelencias marianas -quizá para demostrar que tan importantes eran unas como otras cuestiones- ya estaba en su mente una nueva pastoral que, incluso publicada en el mismo boletín diocesano antes que aquella, tendría, esta vez sí y claramente, un contundente contenido político; era la famosa pastoral de 1 de mayo, primer documento del episcopado que vino a conmover claramente la relaciones entre el gobierno provisional y la Iglesia, por la defensa a ultranza que en él se hacía de la institución monárquica en la persona de ALFONSO XIII.

No cabe duda que a SEGURA le había afectado la campaña que, con fundamento o sin él (aunque, por cuanto llevamos señalado nos inclinamos a pensar que con sobrados motivos pese a las quejas de su clero), se había alzado contra su persona y que ahora quería dejar bien claro y sin lugar a confusiones cual era su pensamiento. Podía ser un rasgo de

Palencia, por último, y de acuerdo con la línea general contra los periódicos de izquierda que hemos apuntado en la nota núm. 3 de este capítulo, alertaba contra su lectura, ya que "si siempre han procurado sembrar la calumnia y la infamia, han de quererse aprovechar de circunstancias que ellos estiman favorables, para lanzar a la publicidad noticias que ellos estiman de galería". Como ejemplo de tal proceder aludía a la campaña contra el primado y a la reacción de la Asociación del clero de Toledo, avisando a los fieles que la misma actuación podía seguir esta prensa contra otros preladados (s.f. "Crónica General, ¡Cuidado con los periódicos!" BOE de Palencia, año 81, 30 de abril de 1931, núm. 9, págs. 303-304).

(67) 30 de abril de 1931, "Las flores de mayo, Carta Pastoral de su Excia. Rvda." BOE de Toledo, año 87, 2 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 146-151.

l nobleza por su parte, dudosamente era un rasgo de inteligencia politica y, ~~menos aun~~, un gesto que favoreciera las incipientes relaciones entre Iglesia y Republica.

La cuestion fue que el cardenal no pudo resistir el deseo de pasar a sincerarse abiertamente en base (bien arriesgadamente, por cierto, cuando hacia cinco dias que el gobierno habia protestado ante el nuncio) a que -segun decia- ya estaban "serenados los animos", razon por la que ya era, a su juicio, tiempo de hablar; iba, asi, a tomar la palabra "con sinceridad absoluta y con la claridad necesaria".

Mas antes de entrar en el analisis de esta pastoral es preciso hacer ~~mencon~~ a que con fecha 29 de abril el Vaticano habia vuelto a dar instrucciones a la Iglesia española, instrucciones que habian sido inmediatamente comunicadas tanto a SEGURA como a TEDESCHINI y, seguidamente, al resto de los arzobispos. En ellas, ampliando las dadas el dia 24, se insistia nuevamente en el acatamiento a los poderes constituidos para el mantenimiento del orden y por el bien comun, en la confianza de que el gobierno respetaria los derechos de la Iglesia y de los catolicos, "in una Nazione in cui la quasi totalita della popolazione professa la Religione Cattolica" y se trataba de la no conveniencia de hacer por el momento declaraciones sobre el concordato y de la cuestion del nombramiento de obispos. El centro neuralgico de estas instrucciones se referia, no obstante, a la preparacion de las proximas elecciones de los diputados que habian de integrar las Cortes constituyentes, a cuyo fin los prelados debian exhortar a los fieles para que, haciendo dejacion de sus tendencias politicas, se unieran con el fin de que fueran elegidos candidatos que dieran plenas garantias de la

defensa de los derechos de la Iglesia y el orden social, tal como habian hecho los catolicos en Baviera en 1918.***

Ya hemos visto como, pese a desconocer tales instrucciones, incipientemente el obispo de Orense, muy claramente el de Oviedo y con gran suavidad el de Avila y el arzobispo de Sevilla, habian comenzado a tratar de la actitud a seguir por los fieles en la proxima contienda politica.

Tambien hemos visto como tanto el de Orense, implicitamente, como el de Madrid-Alcala, en forma expresa, habian apuntado la posibilidad de que muchos catolicos siguieran prefiriendo la derrocada monarquia frente al regimen republicano y le conservaran su afecto.

Ninguna de estas intervenciones habia tenido eco en el gobierno, que, sin embargo, recibiría la pastoral del primado como una verdadera "nota discrepante" en el conjunto de la actitud de la Iglesia, tal como Fernando DE LOS RÍOS

(68)

"Ma quello che importa specialmente è la preparazione alle elezioni per le Cortes Costituenti. I cattolici, astraeendo dalle loro personali tendenze politiche, nelle quali possono rimanere liberi, si uniscano seriamente ed efficacemente per ottenere che alle ventovate Cortes Costituenti siano eletti candidati i quali diano piena garanzia che difenderanno i diritti della Chiesa e dell'ordine sociale. Nella scelta di questi candidati non dovrà darsi importanza alle tendenze monarchiche o repubblicane del candidato, ma averne invece in vista, come è stato detto, sopra ogni altra cosa, la sicurezza circa la garanzia anzidetta. Potrà ai cattolici della Spagna servire l'esempio della Baviera dopo la rivoluzione del Novembre 1918: i cattolici uniti e concordi lavorarono con grande ardore per preparare le prime elezioni, tolse quali essi riuscirono ad ottenere in realtà una notevole maggioranza (sebbene naturalmente solo relativa), di modo che essi, costituendo il più forte gruppo parlamentare, poterono, come si è visto poi coi fatti, salvare il paese dal bolscevismo minacciante, ed anzi per un certo tempo dominante, e tutelare gli interessi della religione fino alla conclusione di un Concordato assai favorevole tanto alla libertà della Chiesa come alle scuole confessionali. In quella campagna elettorale non si parlava di monarchia o repubblica, sebbene di fatto la maggioranza dei candidati fosse internamente di sentimenti monarchici e rimpiangesse la caduta dell'antica monarchia -il ristabilimento della quale, già fin d'allora, difficilmente si poteva sperare-, ma tutta la campagna fu basata, come si è detto, sopra i due punti della difesa della religione e della difesa dell'ordine sociale. E' da sperare che l'Episcopato ed i cattolici in Spagna potranno trovare la via di ottenere simile esito, nonostante la

manifestaba a Vidal el 10 de mayo.⁶⁹ Y cierto es que si los citados obispos se habían referido a dos de las coordenadas fundamentales de la pastoral de SEGURA ninguno hasta el había hablado ni hablaría en términos tan elogiosos de la monarquía ni se referiría con tal minuciosidad al deber de los católicos ante las inmediatas elecciones.⁷⁰

difficoltà e gli ostacoli che la Santa Sede comprende perfettamente. *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 27-28.

(69) En tal fecha el ministro de Justicia contestaría a la carta cursada por el arzobispo de Tarragona en 27 de abril, según los acuerdos adoptados en la conferencia episcopal tarraconense ya aludidos.

(70) La carencia de un análisis de los documentos de la jerarquía en este primer periodo de la República ha hecho que algunos autores valoren la actitud del cardenal SEGURA y el contenido de esta pastoral como un hecho singular en el conjunto de la Iglesia española y que, incluso, sitúen en ella la primera reacción contraria del primado. Así, para RAMOS OLIVEIRA "No más desplegar veía la embarcación republicana le salió al paso la primera borrasca, levantada por una violenta pastoral del primado" Op. cit., págs. 126-127; también TURÓN DE LARA califica de "violenta" la pastoral y, tras destacar la alusión de SEGURA a los beneficios aportados por la monarquía, añade: "A esto seguía un homenaje a Alfonso XIII, una parrafada sobre 'la gravedad del momento' para concluir que los católicos no debían permanecer 'quietos y ociosos' en el momento de elegirse Cortes constituyentes, sino que debían unirse para defenderse y lograr que fuesen elegidos candidatos con suficientes garantías de defender los derechos y el orden social"; extremos, estos últimos que, según hemos visto, ya habían sido tratados por otros miembros del episcopado. Comenta, además, el autor citado que "Aquello parecía una declaración de guerra y como tal la consideró el ministro de Justicia en unas declaraciones hechas el día 9", si bien señala que "la cuestión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado iba a complicarse con ocasión - probablemente más pretexto que motivo- de los acontecimientos políticos del 10 al 12 de mayo" (TURÓN DE LARA, Manuel, *La España del siglo XX*, Barcelona 1974, págs. 302-303). También CUENCA TORIBIO, en igual línea, destaca que, pese a la pastoral y a las actitudes de los integristas en torno al primado y contra la República, "las hendiduras entre ambas potestades carecían todavía de verdadera trascendencia" y que "no obstante las suspicacias que anidaban en la jerarquía y en la cúpula política acerca de una colaboración fructífera, ésta era posible y muy deseada por algunas de las figuras de ambos círculos...", situando igualmente el inicio de las tensiones a partir de los incendios de mayo. Ver CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid, 1985, págs. 26-28). MUNTANYOLA, por su parte, apunta la idea de que "un documento colectivo del episcopado español, publicado en buena hora, hubiera contrarrestado la impresión producida por la pastoral de SEGURA y por las desgraciadas campañas de aquellos días contra la Iglesia" (MUNTANYOLA, Ramón, *Vidal i Barraquer. El cardenal de la paz*, Barcelona 1971, pág. 190). (Más adelante examinamos las anomalías de la publicación del primer documento colectivo del episcopado en el periodo republicano).

La pastoral del primado contenía los siguientes puntos esenciales: gravedad del momento, elogio de la monarquía, deberes religiosos de los católicos y deberes políticos de estos, tanto ante el gobierno provisional como ante las futuras elecciones.

Comenzaba SEGURA refiriéndose a los "gravísimos deberes" que la nueva situación imponía a los católicos y seguidamente no podía menos de sacarse la espina del silencio que había mantenido frente a la campaña contra su persona, achacándolo a la necesidad de reflexión y a la espera del momento propicio para hablar.

Fras ello, y bajo el título "Una mirada al pasado" pasaba a rendir homenaje a la institución monárquica, ligada a la tradición y al catolicismo españoles, en forma que no era posible olvidar; a pesar de ello insistía en como la Iglesia había respetado siempre la forma de gobierno que la nación se había dado, destacando, no obstante, el respeto que la monarquía le había guardado y pasando a expresar un recuerdo agradecido a ALFONSO XIII por su colaboración con ella. Todo ello: su descripción de los hechos del monarca (porque "la hidalguía y la gratitud pedían este recuerdo, que siempre fue muy cristiano y muy español rendir pleitesía a la majestad caída, sobre todo cuando la desgracia aleja la esperanza de mercedes y la sospecha de adulación"), y el recuerdo elogioso que le dedicaba, fue sin duda un aldabonazo que conmovió profundamente la opinión republicana."

(71) Es interesante destacar aquí, como muestra del juicio que estas palabras del cardinal pudieron ser en otros miembros de la jerarquía, que entre los boletines consultados únicamente hemos encontrado reproducida esta pastoral en el de la diócesis de Huesca, Boletín -y esto es lo relevante- que no transcribe, censurándolo en consecuencia, el apartado "Una mirada al pasado" a que acabamos de aludir, aunque publica íntegra el resto de la pastoral (1 de mayo de 1931, "Carta pastoral de su Excel. Rvda. sobre los deberes de los

Aludía el primado a continuación a la "gravedad de la hora presente", para lo que, al igual que había hecho el obispo de Avila Dr. PLA Y DENIEL, se remitía a lo dicho en fechas anteriores; concretamente, según indicaba, al contenido de su pastoral de 27 de febrero de 1930, si bien SEGURA no lo hacía, como aquel, para reforzar la argumentación relativa a la inmutabilidad de la Iglesia frente a los diversos regímenes políticos, sino para apoyarse en lo entonces dicho como una advertencia o premonición de lo que ahora ocurría. Se había referido entonces el cardenal a la ebullición que en los ámbitos políticos se estaba viviendo, "inicio de que nos hallamos en vísperas de una intensa lucha política", cuyas consecuencias no podían conjeturarse pero indudablemente influirían no solo en el orden político, sino en el social "y muy principalmente en el religioso"; todo ello le llevaba a calificar aquellos momentos como graves. Recogidas estas palabras, en ellas se apoyaba ahora el primado para resaltar como los hechos habían confirmado sus juicios refiriéndose

católicos en la hora actual", BOE de Huesca, año 80, 1 de julio de 1931, núm. 7, págs. 393-402). A continuación de la pastoral se publicaban en el mismo número los siguientes documentos: "Declaración colectiva de los Metropolitano", de 10 de mayo de 1931 (págs. 403-405); "Los Metropolitano se dirigen al Gobierno", documento del 3 de junio de 1931 y la "Exposición dirigida al Presidente del Gobierno de la República por el Cardenal Arzobispo de Toledo el día 15 de junio al serle notificada por escrito la orden de expulsión dada por el Gobierno Provisional" (págs. 408-417). Cierra esta relación una nota en que, bajo el título "Nuestra protesta", se señala: "Al mismo tiempo que expresamos nuestra más enérgica protesta por los vandálicos incendios de iglesias y conventos, protestamos por la injustificada expatriación del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado, impuesta por el Gobierno Provisional". Hay que tener en cuenta que, como queda apuntado, este boletín es del día 1 de julio de 1931, con lo que parece que sus redactores quisieron hacer una recopilación de los más relevantes documentos producidos por el Primado si bien con la censura aludida, pues no tendría, en otro caso, sentido publicar en julio, habiéndose celebrado ya las elecciones a Cortes constituyentes, un documento en gran parte relativo a la actuación de los católicos ante ellas.

especialmente a las decisiones del gobierno provisional contrarias a los derechos de la Iglesia, que incrementaban la gravedad entonces apuntada imponiendo a los católicos un deber de actuar al que el cardenal se refería en unos conminatorios términos no utilizados hasta entonces por ningún otro prelado:

"Algunas disposiciones recientes en daño de los derechos de la Iglesia y otras más graves que ya se anuncian y que, por ser de todos conocidas, no enumeramos,⁽⁷²⁾ dan a los momentos actuales una gravedad extraordinaria e imponen a la conciencia de todos los católicos españoles gravísimas responsabilidades, que no podrán eludir ni ante la historia de la Iglesia, ni, lo que más importa, ante el Tribunal de Dios."

A partir de aquí SEGURA abundará en el examen de la situación vigente, refiriéndose, en primer término, al plano espiritual y, singularmente, a la necesidad de la oración y la penitencia, con frases que dejan traslucir su idea de que los acontecimientos políticos no están muy alejados del castigo divino:

"En España en estos momentos difíciles no se ha orado ni se ora lo bastante y no se ha hecho la debida penitencia de los gravísimos pecados con que se ha provocado la divina justicia."

De ahí que fuera necesario rectificar si se quería que triunfara lo que el calificaba de "buena causa", por lo que determinaba la organización de "una cruzada de oraciones y sacrificios" cuyo protagonismo encomendaba a las mujeres, en

(72) Sin duda quería aludir el primado a los anunciados decretos en materia de enseñanza religiosa y sobre libertad de cultos. La enumeración de las disposiciones atentatorias de los derechos de la Iglesia la realizaría concretamente el cardenal, como veremos, a primeros de junio.

razon, mas que probable, de las tradicionales consideraciones eclesiasticas sobre el que ha sido calificado de "piadoso sexo" y porque, dada su exclusion de las decisiones politicas en aquellas fechas, debian asumir una especifica tarea ante los inmediatos acontecimientos, tarea de la que el primado no excluye -remitiéndose a lo expresado el dia 15- ni las rogativas publicas ni las "peregrinaciones de penitencia", como si hubiera que impetrar del cielo una asistencia especial ante hechos casi apocalipticos.

Sentada la actuacion religiosa a seguir, SEGURA entrara de lleno a efectuar concretas recomendaciones politicas a los catolicos, tanto en sus relaciones con el gobierno provisional como cara a las proximas elecciones.

respecto al primer aspecto reiterara el primado la clasica y expresamente transmitida recomendación sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos (constituidos "de hecho", dira) aludiendo casi literalmente al comunicado de ROMA, aunque apostillando -y es algo que ningun prelado llegaria a afirmar- que "puede suceder que entre los filosofos cristianos haya cierta unanimidad en preferir cierto regimen", mas indicando que la Iglesia ha reservado en este punto su parecer, frases que bien parecen ir en contra de la claridad introducida en el pensamiento eclesiastico a partir de Leon XIII, como ya hemos apuntado. No se quedaria asi el primado y aun añadira que la mejor forma de gobierno ha de determinarse no solo a la luz de los principios filosoficos, sino en función de "multitud de circunstancias" que "pueden hacer preferible una forma de gobierno que teoricamente no sea la mas perfecta", expresion con la que SEGURA deja traslucir su personal parecer respecto a monarquia y republica.

Se refiere al cardenal seguidamente a la disposicion de la Iglesia o colaborar con el poder civil (salvando, claro es, la superioridad e inferioridad respectivas de cada orden de actuacion), pero pidiendo, a la vez, que este respete los derechos de aquella y que, desde sus propias competencias, la ayude, "en perfecta concordia", al cumplimiento de sus fines.

Tras esta admonicion entrara el cardenal en la parte mas amplia de la pastoral, que es la que se refiere a la actuacion de los fieles en las proximas elecciones, concretamente titulada "Deberes de los catolicos en su actuacion politica". Aqui se basara SEGURA, fundamentalmente, en frases de los ultimos papas para defender el derecho de la Iglesia a prescribir al ciudadano lo que debe hacer, y lo hara desde la beligerante argumentacion de que le es preciso defenderse "en el mismo terreno que se la combate", pues si bien no se inmiscuye en las cosas temporales, "tampoco puede consentir que se desconozcan o se mermen sus derechos ni los derechos religiosos de sus hijos". De ahi que, partiendo de estas premisas, elija el primado una serie de citas tendentes a demostrar que la abstencion o pasividad de los catolicos equivaldria a dejar "en manos de sus enemigos" el gobierno de la sociedad, citas de las que la de mayor ponderacion es, precisamente, la de León XIII y que le sirven para, basandose en doctrina ajena y superior, indicar a los fieles la necesidad de "cumplir valerosamente con su deber", uniendo sus esfuerzos "para luchar con perfecta cohesion y disciplina", unico proceder con el que podrán "mirar tranquilamente el porvenir, seguros de la victoria".

"Si permanecemos "quietos y ociosos"; si nos dejamos llevar 'de la apatia y de la timidez'; si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religion o fiamos el triunfo de nuestros ideales a la benevolencia de nuestros

enemigos, ni aun tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestra que, habiendo tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria."

De ahí que todos los católicos debieran, *sin distinción de partidos políticos*,⁷³ unirse "en apretada falange", fueran monárquicos o republicanos, cuestiones sobre las que cada cual podía disentir, pero que debían superar "cuando el orden social está en peligro" y "los derechos de la Religión están amenazados".

A continuación, y para recalcar y clarificar su postura y probablemente para justificar hasta el último extremo sus palabras, SEOURA continuara su discurso transcribiendo las instrucciones últimas del Vaticano, insistiendo, por este sistema, en la necesidad de acción conjunta para lograr que en las próximas Cortes constituyentes fueran elegidos candidatos "que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social" en forma similar a la seguida por los católicos de Baviera.

Con texto de Pío X insistirá, por último, el cardenal en la obligación de los católicos de negarse a colaborar respecto a disposiciones contrarias "a los derechos de Dios y de la Iglesia" y a actuar en defensa de los mismos.⁷⁴

(73) En bastardilla en el original.

(74) 1 de mayo de 1931, "Carta Pastoral de su Eclesia, Rvma. sobre los deberes de los católicos en la hora actual", BDE de Toledo, año 87, 2 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 137-145. Ver el texto íntegro de la pastoral en el apéndice núm. 6. A pesar del fuerte, y lógicamente negativo impacto que la pastoral iba a producir en los medios republicanos, el estricto resumen publicado por el independiente "El Sol", lo sería bajo el positivo titular: "La Iglesia no siente predilección por determinada forma de gobierno", destacando así el aspecto más tradicional y menos polémico de su contenido ("El Sol", 7 de mayo de 1931).

Llegados a este punto es interesante destacar como el cardenal SEGURA intento desde los primeros momentos, dirigir la actitud que habia de adoptar la jerarquia.⁽⁷⁵⁾ Incluso hay que decirlo- con alguna pequeña añagaza. Así, el 4 de mayo, es decir, dos dias despues de publicada la pastoral y tres tras su firma, enviaria una nueva circular a los restantes prelaos (la num. II, también, "confidencial y reservadísima") trasluciendoles las ultimas recomendaciones de la Secretaria de Estado del Vaticano recogidas textualmente en su "exhortacion", y lo haria en la probable ignorancia de que, en esta ocasion y para ganar tiempo, el Vaticano las habia remitido a todos los metropolitano y no, como hacia en otras ocasiones, tan solo al nuncio y al primado.⁽⁷⁶⁾ Lo chocante del asunto es que en dicha circular el cardenal aludia a su ya publicada pastoral mas señalando que tal publicacion se habia efectuado el mismo dia 4 en que fechaba este escrito, e indicando que habia actuado así: "ganando tiempo y para cumplir a la letra las orientaciones pontificias", a ello añadia que creia conveniente que "en una u otra forma" hicieran los obispos suya la pastoral, apuntando incluso que no se habia atrevido a firmarla en nombre de todos "por no contar con su abuencia previa", e insistiendo en que lo habia hecho publico porque estimaba "que no habia tiempo que perder".⁽⁷⁷⁾

(75) A este extremo aludiremos con mayor detalle mas adelante, (ver la nota núm. 107).

(76) Así lo pone de relieve MUNTANYOLA en la obra citada, pag. 189, así como expresamente se hacia constar en esta ocasion en la carta del cardenal FACELLI.

(77) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 41-43. En esta circular el cardenal SEGURA aludia también a la organizacion de la union de los católicos en la coalición "Acción Nacional" que era preciso "apoyar decididamente". Sobre la constitucion y actuacion de Acción Nacional, mas tarde "Acción Popular", ver Ibid. nota 3, la obra de FERNÁNDEZ AREAL, *La politica católica en España*, Barcelona, 1970 y RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presion en la segunda Republica española*, Madrid, 1969, pags. 155-156 y 222-224.

La ceguera de SEGURA ante el impacto que pudiera tener el contenido y estilo de su pastoral parece, pues, evidente. La reaccion del gobierno, no obstante, no se hizo esperar y, en forma inmediata tras la publicacion de este documento solicito de la Santa Sede la remocion del cardenal de la silla metropolitana de Toledo.

2.2. La circular del cardenal VIDAL.

Muy distinta a la de SEGURA seria, como era de esperar cada la actitud de moderadora colaboracion asumida desde el primer momento por el cardenal VIDAL, la circular que este publico, fechada el dia anterior, el 5 de mayo, con el objeto de, a fin de seguir las ultimas instrucciones de la Santa Sede, estimular a los catolicos a participar activamente en las proximas elecciones. Al igual que habia hecho SEGURA y como mas aceiante haria GOMA, al no haberse dirigido en forma inmediata a los fieles tras la proclamacion de la Republica, englobaria en el mismo documento las instrucciones sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos y las relativas a la actitud de los catolicos ante las urnas y, en este caso, las consideraciones de la jerarquia parecen querer apartarse conscientemente, en vivo contraste con el amargo enfrentamiento con la realidad que ha querido asumir SEGURA, de efectivas constataciones o de posibles actuaciones del regimen contrarias a la Iglesia, situando todo el discurso en un elevado plano teorico que poco tenia que ver, realmente, con la situacion politica que estaba viviendo el pais.

Para el arzobispo de Tarragona el cambio de régimen merecería el objetivo calificativo de "gran acontecimiento", en razón de "constituir una fase muy destacada en los anales de la historia" y "por la trascendencia que pueda tener en los futuros destinos de nuestro pueblo".

Dichas estas ponderadas frases, VIDAL destacara como, para los creyentes, la Iglesia era guía infalible tanto para las cuestiones privadas como para las publicas, siendo, por tanto, invariables sus normas para todos "los estamentos sociales en que puedan hallarse los pueblos". De ahí que (y aquí el cardenal sigue también la misma táctica que ya hemos visto empleada por el Dr. PLA Y DENIEL, si bien señalando expresamente su propósito y no transcribiendo sus propias palabras) pueda recordar las normas de la Iglesia tal como ya las expuso en su pastoral de marzo de 1925. Según estas normas -añadira, citando singularmente a León XIII- la religión sería el fundamento de la sociedad y, en base a esta premisa, podían darse ideales relaciones en las colectividades, "en un ambiente de mutua y cristiana cordialidad". Para consolidar tal argumentación considerara preciso el cardenal pasar a aludir tal como había hecho el Dr. FARRADO, a la doctrina del origen divino del poder si bien insistiendo en la diferenciación entre los conceptos de "potestad" o "autoridad", y las personas que la ejercían; los nombres, podían, por consiguiente, determinar estas personas, pero nunca fundamentar la razón misma de la autoridad, que provenía de Dios, razón por la que había de ser respetada, fuera quien fuera el que la ejerciera.

Hechas estas consideraciones con las que, como vemos, el Dr. VIDAL soslayaba cualquier referencia a las distintas formas de gobierno o a la posible actuación concreta de este, defendiendo el sometimiento a ultranza al poder civil, sin acepción de personas, en una teoría que, llevada hasta sus últimas consecuencias sería difícilmente asumible; pasaba a

pasaba a matizar esta posible dificultad partiendo, otra vez, de utópicas hipótesis solo justificables en una sociedad casi teocrática. "A su vez la autoridad -dirá (y aquí no distingue entre institución y persona)- contando ya con el acatamiento, respeto y obediencia que le presten aquellos que la consideran como representante de Dios, tratará con justicia y equidad a los subordinados, sabiendo que debe dar cuenta de sus actos al Señor de los cielos que le ha de juzgar"- la autoridad, pues, nunca podría ejercerse, según estas argumentaciones, tiránica o despoticamente, la autoridad -también- estaría revestida de un cierto don paternal.... conceptos todos ellos (incluido el de "subordinados") que, si propios de la tradición escolástica tendente a justificar el porqué de la obediencia en la sociedad civil, tenían difícil encaje en las puras teorías democráticas a raíz de las fundamentaciones filosóficas del contrato social.

Aclarado, según esta religiosa e ideal perspectiva, el porqué de las buenas relaciones con el poder civil, no dejaría de referirse el arzobispo al otro poder, también creado por Dios en toda sociedad: el de la Iglesia, para concluir que ya que la divinidad es origen de ambas potestades, las dos habían de convivir en mutuo respeto.

El hermoso panorama diseñado por el cardenal no podía tener, lógicamente, más que saludables efectos, "ejemplar cordialidad de relaciones" que sería indudable estímulo "para que todos se aprestaran a aportar su colaboración al bien público", palabras con las que el cardenal inicia el tratamiento del objeto principal de la circular: desarrollar los deseos de la Santa Sede respecto a la participación de los católicos en las elecciones:

"Consecuencia lógica de esta actuación de los católicos en los negocios públicos lo es su intervención en los comicios para poder influir de manera más eficaz en la sana y cristiana orientación de los problemas que se presentan en la vida de los pueblos. No solo se establece esta positiva obligación, sino que además se reputa como desertar del propio deber el abstenerse de emitir el voto en pro de los intereses sagrados que todo católico viene obligado a defender."

Como vemos, el Dr. VIDAL no incorporaba al texto de su circular las normas expresas de la Santa Sede, adoptando una actitud ecléctica en su transmisión, por cuanto pasaba a incluirlas en las disposiciones que, como anexo, acompañaban a la misma y especialmente dirigidas a los sacerdotes que, en todo caso, debían hacerse eco de ellas ante los fieles. Con independencia de los dos puntos en que en tales instrucciones se aludía al tema de las elecciones (y casi diríamos que muy duramente en el que era redacción personal del cardenal), los restantes contendrían normas relativas a rogativas, actuación del clero, sometimiento a los poderes constituidos, etc. muy similares a las ya dictadas por otros prelados.⁽⁷⁸⁾

(78) 4 de mayo de 1931, "Circular. A nuestros amados diocesanos", BDE de Tarragona, año 67, 5 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 197-202. Aunque recogida en la recopilación de BATLLORI Y ARBELDA (creemos positivo incluir el texto íntegro de la circular en el apéndice núm. 7,

Es interesante resaltar que el boletín en que se publicó era el primero que aparecía en la archidiócesis de Tarragona tras la proclamación de la República haciendo referencia expresa al cambio de régimen; el anterior, de 15 de abril, tan solo contenía el texto íntegro de la "Casti Connubi".

También es oportuno apuntar que según señalan los recopiladores del archivo del cardenal la instrucción núm. 69 de las contenidas en el anexo, en la que se trataba de la actuación ante las urnas de acuerdo con las instrucciones del Vaticano, fue modificada en su primitiva redacción por el interés del cardenal PACHELLI en que se siguieran fielmente las normas transmitidas. (*Esquerra* : *Estat durant la segona*.... I, pag. 37, nota 1.

2.3. La pastoral del Dr. GOMA, obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela.

Imprescindible es citar, por último y para acabar de reflejar las distintas reacciones de la jerarquía española ante el nuevo régimen, la extensa pastoral que, tal como había anunciado a sus diocesanos, saldría de la pluma del Dr. Isidro GOMA y TOMAS, pastoral en que, cada vez las tardías fechas de publicación, trataría -como habían hecho SEGURA y VIDAL- tanto del acatamiento a los poderes constituidos como de la actuación de los católicos ante las próximas elecciones, temas que abordara desde el encuadre de su singular prevención ante el régimen republicano, siendo así una verdadera llamada de alerta para los católicos con una velada e implícita descalificación del nuevo régimen.

Queremos indicar, por último, que esta circular fue reproducida por los Boletines eclesiológicos de las diócesis de Tortosa (15 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 166-172, calificándola de "Carta pastoral"); Vich (30 de mayo de 1931, núm. 2674, págs. 295-304); Urgel (1 de junio de 1931, núm. 1), págs. 157-162) y Gerona (22 de junio de 1931, núm. 9, págs. 240-247). El Boletín de Vich sólo reproduce párrafos y la publica conjuntamente con la circular del arzobispo sobre los incendios de iglesias y conventos a que más adelante aludiremos, cosa que también hace el de Gerona reproduciendo sólo la versión catalana de ambos textos íntegros y sin comentario alguno, a diferencia del obispo de Vich, que añadió:

"Es nuestra voluntad deliberada que el clero y fieles de nuestra amada Diócesis acepten los anteriores documentos, como emanados de esta Sede Episcopal; que regülen su criterio y conducta por la sólida doctrina en ellos encerrada; teniendo muy presente que si como ciudadanos son miembros de la sociedad civil, cuya Autoridad deben respetar, como católicos son miembros de la Iglesia, cuyas enseñanzas deben admitir y llevar a la práctica, cumpliendo así el precepto del Señor: dad al César lo que es del César; y a Dios lo que es de Dios".

Es esta pastoral el mas largo y prolijo documento escrito por la jerarquia a consecuencia del cambio politico y, como suele suceder con la pluma del Dr. GOMA, no es facil su analisis, dado lo farragoso de su redaccion en una espiral de razonamientos, insistentemente reiterados y que diversifica en multiples facetas. Si parece, no obstante, que puede afirmarse de ella que se trata de un documento de construccion puramente intelectual y carente, por tanto, de expresiones de intima conviccion, lo que hace que, pese a la profusion de doctrina con que arroja sus palabras, resulte en muchos parrafos carente de verdadera profundidad.

El excesivo empeno del obispo en razonar con diversos argumentos el mandato de la Santa Sede deja, en definitiva, latente la idea de que el Dr. GOMA tenia como unico proposito convencer a los catolicos de la bondad de las instrucciones vaticanas, precisando recurrir a tan redundante discurso porque el mismo careciera de tal convencimiento.

Comenzaba el Dr. GOMA su escrito indicando expresamente que su proposito era desarrollar los puntos de la carta del nuncio, tal como en su circular del dia 29 pasado anunciara, no sin indicar que por mas que los fieles agradecieran las orientaciones que se proponia dar, ello no era tarea facil "en momentos como el presente, en que la acomodacion a un nuevo regimen politico, debe llevar por fuerza una revision fundamental de derechos y deberes, efecto de nuevas orientaciones en el regimen del pais", lo cual plantearia la logica confrontacion de opiniones y doctrinas; el, no obstante, pretendia, precisamente, tratar de esa "primera actitud" que habian de adoptar los catolicos ante el cambio, dejando de referirse a esas "cuestiones gravissimas que deberan ventilarse en lo futuro", pues necesario era ahora, a su juicio, tomar rapidas resoluciones de situacion, dado

que "son muchas y muy sagradas... las cosas que debemos salvar en los presentes momentos de incertidumbre".

Quería el obispo justificar ante todos la razón que le asistía para dictar unas orientaciones que parecían rozar el ámbito de lo político; no era su propósito inmiscuirse en pareceres de práctica política, pero quería resaltar cómo lo político informaba todos los matices de la vida comunitaria y era informado, a su vez, por la moral, cuestión esta que atañía a la esfera espiritual y, por ende, a la Iglesia. De ahí que sus recomendaciones lo serían desde el estricto ámbito de la moral cristiana en cuanto esta tenía sus propias normas sobre la organización social y el papel de los creyentes en ella.

Justificado así su discurso entrara ya de lleno el Dr. GOMA en el análisis de las relaciones entre la Iglesia y los distintos sistemas políticos, análisis que, si reiterativo en muchos aspectos de las palabras de otros miembros del episcopado en su exposición de la tradicional doctrina eclesial, contiene unas novedosas opiniones difícilmente asumibles por demócrata alguno.

Comenzará el obispo insistiendo en el indiferentismo de las formas de gobierno para la Iglesia, la cual -y en contraste con los pronunciamientos de SEGURA sobre la posible perfección de ciertas formas de gobierno y la reserva de parecer de la Iglesia- no tiene "ningún principio cognoscitivo o moral que imponga, ni siquiera recomiende, una forma determinada de regirse los pueblos...", no teniendo tampoco ninguna preferencia en cuanto "a la doctrina sobre la excelencia de una forma de gobierno sobre otra". Ahora bien, resaltaba el prelado trayendo a colación duros juicios evangélicos sobre algunos detentadores de la autoridad: era lícito proceder con los gobernantes según ellos procedieran con su magistratura,

toda vez que "el acatamiento de la autoridad no es claudicación de la conciencia", aclarando que la doctrina sentada por los dos apóstoles "mas representativos de la autoridad eclesiástica", debido al roce de ambos poderes desde los albores del cristianismo y a la necesidad de clarificar una situación "que debiera plantearse en todo lugar y tiempo", les llevo a defender la necesidad de acatamiento a toda autoridad, incluso a la de un "infiel", en razón a que toda autoridad proviene de Dios; planteamiento este que, unido a la plasmación de las graves palabras evangelicas sobre algunos gobernantes que anteriormente ha hecho, parece pretender expresar un duro juicio sobre las autoridades constituidas (bien fuera suyo, bien quisiera reflejar, a su traves, los posibles pareceres de muchos catolicos) para acabar defendiendo, no obstante, el sometimiento a tales autoridades, como incluso hizo Cristo, (siempre salva la no "claudicación de la conciencia") "sometiéndose por su voluntad a los poderes legitimamente constituidos, aun en el abuso monstruo de su autoridad", con lo cual concluire que la Iglesia es, precisamente, "una escuela de acatamiento a la autoridad publica", afirmacion tanto radical con la que GOMA obviaba grandes periodos de historia eclesial.

Mas, situándose en el ejemplar plano de la actitud evangelica, y soslayando asi otras etapas mas mundanas de reivindicaciones vaticanas, continuara el obispo recomendando, en esa linea argumental cuya base parece partir del recelo hacia los nuevos gobernantes, que, pese a ello y fueran como fueren estos, los catolicos debian respetarlos. Añadira a continuación que "por lo que toca a los presentes momentos, a pesar del cambio profundo obrado en las cosas de nuestra patria... [no] parece que sea la persecucion violenta la que nos amenaza, como tuvieron que sufrirla la Iglesia y los eclesiasticos en epocas en que, con vocearse menos la democracia, se soltaron contra las

cosas de Dios las furias de la demagogia desenfrenada". Con lo que al apuntar esta posibilidad, por mas que tienda a descartarla, no deja de entreabrir GOMA una via que, dada su consideracion sobre el nuevo regimen suficientemente plasmada en esta y en sus anteriores palabras, parece desear que los catolicos tengan en cuenta la posible agresividad de la futura andadura politica. (Entendemos que estas palabras van referidas, en el contexto de sus alusiones a la autoridad, a la posible actuacion persecutoria de esta, y no, como inmediatamente iba a suceder, al agresivo comportamiento de la masa anticlerical).

Por lo pronto ello no era asi, los catolicos habian de seguir la tradicion cristiana, obedeciendo, respetando e incluso venerando a quienes ejercian la autoridad que (y aqui hay una nueva insistencia en ese acatamiento, sean como sean las autoridades). Si hacian mal uso de su poder, "cuanto por los atropellos que cometer puedan contra poderes ajenos al suyo, deberan dar cuenta a Dios, aunque en El no crean". Para GOMA esta razon del juicio ultimo de la divinidad seria lo que lograria "que la majestad del poder este acompanada de la reverencia honrosa que de buen grado le prestarán, como es deber suyo, los ciudadanos", los que -sin ilazon entre uno y otro argumento- una vez estuvieran convencidos de que la autoridad de los gobernantes provenia de Dios, les dirigieran su acatamiento, ya que, incluso, era menos ilicito despreciar la potestad legitima, "quienquiera que sea el poseedor de ella", que "el resistir a la divina voluntad", lo cual llevaria a quienes asi hicieran a la perdicion.

Expuestas asi las razones genericas de la obediencia debida a los poderes constituidos, cuyo hilo conductor, insistimos, viene marcado por el deber de tal comportamiento aunque quienes detentaron dichos poderes parecieran para un catolico no merecedores de ello, pasara el Dr. GOMA a

justificar la razón de tales recomendaciones de la Iglesia y de la propia actitud por ella adoptada, comenzando por destacar como cabía oponer reparos a tal proceder, acnacándole, en primer término, su variabilidad "hasta un acomodamiento poco honroso y demasiado rápido al nuevo estado de cosas", frente a ello esgrimía nuevamente argumentos de obediencia, si bien ceñidos esta vez a la que los católicos debían al papa por el hecho de serlo, y ello "aunque fuera circunstancial la orientación que nos diera... y diversa, que no lo es, de la señalada en otros casos", lo cual era debido (y vuelve a haber aquí un nuevo matiz de desaprobación implícita al régimen) a que "el adoctrinamiento de la grey cristiana, dentro de las líneas inmutables de la verdad, tiene sus exigencias de momento, como las tiene la táctica en un combate". De todas formas no era "un cambio de frente" el que operaba la Iglesia, en estos casos los cambios se producían fuera de ella, la Iglesia seguía imperturbable donde la doctrina de su fundador la había asentado, de ahí que "Nosotros, individual y socialmente, somos los de un día, y acostumbrados a un día de sol, nos asombra y asusta la aparición de una tormenta, a la que asistimos como a cosa insólita".

Mas, junto a la inmutabilidad de la Iglesia, necesario era destacar de ella otra cualidad, cual era la de su adaptación a las circunstancias para el bien de las almas, adaptación que no implicaba ni cesión de sus derechos ni una elección de lo que fuera más positivo para ella. "No se sitúa la Iglesia al abrigo de ningún caracol al amonestarnos para que respetemos y acatemos los poderes constituidos. Para la Santa Iglesia no hay soles que calienten más. No tiene más sol que el de la justicia..." y, así, si en casos había podido ser perseguida por monarcas en otros había vivido "en feliz y fecundo consorcio con gobiernos democráticos de denominación republicana, como en alguno de los Estados de Sudamérica"; razonamiento que venía a

reforzar con otro revelador no tanto de sus posibles afinidades, cosa difícil de enjuiciar en la actualidad de aquellos momentos, como de su falta de perspectiva histórica y de la excesiva ligereza y escasa ponderación del primado al arriesgarse a señalar, en unos muy incipientes momentos para el desenvolvimiento de la Iglesia germana, lo siguiente:

"Y ¿quien ignora que en nuestra Europa, en la nueva republica alemana, puede el catolicismo hacer una labor de penetración pacifica, habiendo ya logrado visibles conquistas, tal vez imposibles durante el imperio?"

La Iglesia, pues, no era monarquica ni republicana, era una cosa y otra "segun los paises y los tiempos", colaborando con una u otra institucion "no por espíritu de servidumbre o utilidad, ni por afán de hegemonia politica, sino por mandato divino y para cumplir sus fines sobrenaturales".

No cabía duda, no obstante -y aquí GOMÁ roza los argumentos esgrimidos por SEGURA-, que de la constitucion de la Iglesia podia sacarse "un argumento en pro de la doctrina filosofica de la excelencia de la monarquia sobre toda otra forma de gobierno", hipótesis que inmediatamente maticara al indicar como "de su regimen y de su espíritu deberan siempre aprender todas las democracias", dados sus fundamentos de igualdad y de caridad, que la hacian "un solo pueblo" o "la gran familia de Dios".

La independencia de la Iglesia frente a todo poder terreno venia, por otra parte, a reforzar su supremacia frente a ellos, basada en sus fines eternos, cancela una superioridad statica en razon de su inmutabilidad frente a las vicisitudes de los poderes civiles, lo que le permitia,

cuando estos comprendian su mision, ejercer aquella con una eficacia de la que careceria si se aliara con cualquiera de las formas en que pudieran representarse tales poderes.

Tras esta defensa de la actitud general de la Iglesia, y a fin de no dejar sin afrontar cualquier duda que pudiera existir en el corazon de los fieles ante los mandatos vaticanos, querra GOMA aludir a las posibles suspicacias nacionales, entrando directamente en un terreno que ningun otro prelado se habia atrevido a tratar tan frontalmente. La Republica hispana, para muchos catolicos, "ha representado siempre la tendencia izquierdista extrema y, por lo que atañe a nuestra religion, republica parece ser sinonimo de anticlericalismo". Reconocera el prelado esta verdad y no querra disminuir su fuerza en trases que bien pudieran encerrar una advertencia para el nuevo regimen, por mas que claramente quiera puntualizar que se refiere a la historia y no al presente. "La republica española ha estado lejos de prodigar a la Iglesia su proteccion, ni le ha brindado, en sus propositos y programas, halagueño porvenir"; preciso era reconocer estos hechos: "a lo menos hasta ahora han sido asi". Frente a ello y con una expresion harto diplomatica, absolutamente carente de base frente a las disposiciones del Estatuto juridico y en unas fechas en que ya habia aparecido el decreto relativo a la enseñanza de la religion en los centros oficiales, en desarrollo de aquel, (cosa que, si hay que fiarse de la honesta postura del prelado, este debia ignorar), añadira: "fundadamente esperamos que se rectifiquen criterios y conductas y quede en nuestra España definitivamente purificado el nombre de republica de la mala nota que se le atribuyo".

Esta anticlerical actitud estaba, no obstante, demasiado entretrejada con la historia patria y, asi, podia el prelado quejarse -nuevamente con una extrema diplomacia, y en profundo contraste con las palabras que el Dr. ARCE

OCHOTORENA escribiera el 27 de abril- de que "a pesar del buen proposito de conservar el orden" el cambio de régimen, "sin culpa de los poderes constituidos y hasta contra sus prevenciones", habia estado señalado con profanaciones y gritos contra cosas y personas sagradas, habiéndose creído algunos maestros "con derecho a descolgar de su escuela el Santo Crucifijo y a prohibir al sacerdote la entrada en ella en cumplimiento de su función sagrada y legal", a ello podia sumar como el mismo habia debido consentir la retirada de una imagen religiosa de un lugar publico donde hacia poco habia sido oficialmente entronizada. Lejos estaba GOMA de sospechar que la actitud de las masas que describia iba a llegar a su cénit el mismo dia siguiente y que la absolución con que rodeaba la actuación del nuevo gobierno se iba a ver pronto empañada al ser el mismo gobierno el que expresamente permitiera la retirada de los crucifijos de las escuelas, apoyando una opinion que, si no generalizada, algunos se habian adelantado a concretar en el terreno de los hechos.

A pesar de ello, a pesar de lo que hasta ahora se habia producido, ninguna fuerza perdian, insistira el obispo, las razones y enseñanzas tradicionales de la Iglesia, por lo que, abundando en esta postura, pasara a defender, con ideas que no hemos encontrado en ningun otro prelado, el acatamiento al poder constituido incluso en el caso de que su doctrina politica pudiera no ser aceptada en algun extremo, siempre y cuando sus leyes correspondieran al ambito de su esfera de actuación y se encaminaran a la consecucion del bien comun:

"Ante todo, cualquiera que sea la actuación de un gobierno, desde el momento en que no se trata de un partido politico sino de un regimen que, de simple hecho o de pleno derecho, esta establecido y rige los destinos del Estado, es absolutamente separable, y de hecho debe separarse, la cuestion

de su ideología y la de la autoridad que posee; ni se le puede hacer responsable de desmanes que no autorice o ampare. Por lo mismo, si su doctrina política deja de ser aceptable en algún punto, no puede dejar de serlo su autoridad cuando legítimamente se ejerce; y la ejercerá legítimamente siempre que legisle dentro del ámbito de su jurisdicción y según las exigencias del bien común, fin supremo de toda autoridad civil."

Nos encontramos una vez más, ante la engañosa profundidad del razonamiento del Dr. GOMA, enlazando frases llenas de poder de convicción pero de las que no llega a extraer sus últimas consecuencias al no plantear hipótesis más acordes con la realidad, como la actuación política del gobierno provisional y de las futuras Cortes iban inmediatamente a demostrar. En todo caso, ¿quién determinaba los componentes de eso que el Vaticano y los prelados llamaban el "bien común"? ¿No vendría prefijado en alguna de sus coordenadas por una "doctrina política" que pudiera no ser aceptable "en algún punto" para la Iglesia? Y ¿qué habrían de hacer los católicos ante esa autoridad que, legalmente constituida, marcaba una serie de hitos de lo que consideraba "bien común" de acuerdo con sus competencias jurisdiccionales para organizar el entramado social? ¿No se planteaba, pues, GOMA, las posibilidades de libertad de pensamiento, de creencias, de cultos; las posibilidades -cuando menos- sino de una constricción en el actuar de la Iglesia católica, si, en todo caso, de la libertad expansiva de otras creencias y actitudes? Y ¿qué debería hacer un católico frente a una autoridad que tales realidades amparara e impulsara en pro del "bien común"? GOMA calla, sus argumentos llegan tan solo hasta el interés de la Iglesia en ese momento: parece querer asumir el límite de las posibilidades, se acerca, pero al rozarlo, enmudece. Ideales llamadas, otra vez, a la decidida actuación de los católicos en pro de ese indeterminado concepto del bien, "en orden al bien común y a la conservación del orden se exige nuestro

respeto y colaboración con los poderes constituidos", porque, si así actúan, conseguirán, "el derecho a que los mismos poderes hagan respetar, por parte de quienes podrían ampararse en su ideología... los sentimientos religiosos y las cosas santísimas de nuestra religión". La Iglesia solo les exige el acatamiento derivado de la constitución legítima del poder político "y de sus funciones honestas", y hasta ahí han de llegar los católicos sin más consideraciones que, en todo caso y para GOMA, serían, frente a toda evidencia, "prejuicios" que no deberían modificar la actitud que de ellos demandaba la Iglesia: "Un prejuicio de que otro puede obrar mal no legitima un juicio que nos exima de obrar bien".

Pero no se contentará el obispo con cuantos parciales argumentos ha ido esbozando, aun le faltara alucir, por si no ha logrado convencer a todos con cuanto lleva dicho, a la dimensión de pura estrategia política que también los fieles habrían de tener en cuenta: "los sistemas -dira- se exageran en la oposición"; aclarará enseguida que se refiere a una hipótesis que nada tiene que ver con hechos realizados, estos "vendrán... o no vendrán", mas, entre tanto, los católicos serían responsables si se situaran en una posición "adversa" por restar su asistencia a los gobernantes "en aquello en que tienen derecho a esperarla de todo buen ciudadano"; tal sería una "pobre política ... cuando se plantean gravísimos problemas para la comunidad".

Obrando de otra manera, además (y aquí inicia el prelado un nuevo argumento con el que, abandonando el plano político, llama a la actuación en la caridad, propia del cristianismo), se daría "una eficaz lección de apostolado cristiano social", lo que haría disminuir "el mal y sus derechos sociales, si alguien pudiera alegarlos".

Difícil es, ya lo hemos dicho, poder extraer las últimas coordenadas en que se mueve el discurso de GOMA, había, como otros prelados, del "bien común", mas, a diferencia de ellos, no sólo lo plantea como valor a conservar en el nuevo Estado, sino que se basa en él para perfilar lo que ha de ser el legítimo actuar del poder político; frente a este "bien común" sitúa ahora "el mal y sus derechos sociales", a cuya realidad los católicos podían enfrentarse a base de la bondad de su actuación; con ello, además, podría aspirarse a que esa "bondad" tomara la forma de "masas sociales enormes", con la extraña conclusión de que, así, sería "mas respetable que diluida o atomizada". ¿Que cabe extraer de todas estas frases si no es la conjetura de que el prelado está pensando en realidad en dos ideologías que se enfrentan: la cristiana, por una parte, y la atea, que también reclama su espacio de existencia; consideraba el obispo que la extensión de aquella y su implantación en las masas le daría el necesario peso para configurar el devenir histórico.

Aun a riesgo de extraer de las oscuras frases del prelado expresiones de mayor alcance que las que, de hecho, pretendía, no cabe duda de que en este punto de su pastoral su discurso quiebra la argumentación en defensa de la obediencia a las autoridades del nuevo régimen político para insistir en la actuación de la Iglesia cerca de las masas populares y frente a otras ideologías (¿ese "mal y sus derechos sociales"?) que pudieran conquistarlas. Son las suyas las primeras palabras que sobre este extremo pronunciaría la jerarquía en la República, palabras que, plenas de un mesiánico paternalismo que juzga al pueblo como un menor de edad imbuido de principios cristianos y, por tanto, de propiedad eclesial, examinaran, criticándola, la propia actuación seguida por esta Iglesia ante las justas reivindicaciones populares en un régimen político más propicio a su libre acción que el que, al parecer, podría representar la

Republica: "Hemos trabajado poco, tarde y mal, mientras pudimos hacerlo, mucho y bien, en horas de sosiego y bajo un cielo apacible y protector". No querrá, sin embargo, ser extremoso en su crítica: los sacerdotes habían cumplido muy bien sus "ministerios clásicos", el fallo había estado en no haber actuado "en el plano en que hoy se agitan los pueblos"; esta casi nula actuación del catolicismo en el plano social que GOMÁ claramente constatará,⁷⁹ podía conducir ahora, en momentos de transformación y agitación ideológica, al vaciamiento del sentir religioso de ese pueblo que aun pertenece a la Iglesia pero cuya realidad se estaba transformando ante la pasividad del catolicismo, que había quedado, así, desfasado de la marcha social:

"No hemos advertido que si en el fondo de las aspiraciones populares de cultura, de bienestar, de legítimas reivindicaciones sociales no se pone el fermento religioso que debe vivificarlo todo, el alma del pueblo se vaciara de religión, que no puede separarse de las cuestiones vitales de la sociedad, y se dejara seducir por quienes, aun engañándole con promesas irrealizables, le ofrecen el concurso de su ideología, de su dinero, de su esfuerzo.

"Y el pueblo ha sido conquistado, o está a punto de serlo, bien lo sabéis los que estais en contacto con él. Y no debía serlo, porque por el fondo de su alma, buena y cristiana, aun nos pertenece.

...

"El pueblo se ha corrido hacia adelante: nosotros no nos hemos puesto a su compás."

⁷⁹ Ver sobre el particular la obra citada de BENÍDIZ: *El proceso social del catolicismo español*. Arboleya Martínez, Barcelona, 1973 y el capítulo sobre "España" en *Historia del movimiento obrero cristiano* AA.VV. edición a. editado de S. + (Soc.). Barcelona, 1964.

No seran los eclesiasticos los unicos merecedores de sus criticas, tambien el apostolado seglar "ha sido escaso y desorganizado"; una cosa era la conviccion cristiana particular y otra muy distinta la actuacion decidida en el ambito publico; nuevo matiz diferenciador aqui, cuando trata GOMA de la accion de los fieles al trascender, en relacion a ellos, el estricto campo social y asomarse, segun el sentido de sus palabras, a la accion politica en un diseno del seglar modelico, que parece estar describiendo el mejor nucleo de los propagandistas de Accion Catolica. Dimension politica decimos, aunque el obispo no la cite expresamente y se limite, como es habitual en su estilo, a insinuarla y, asi, refiriendose a la actuacion apostolica de los catolicos comenzara constatando: "Nos gana en esto el adversario", para quejarse seguidamente -salvo honrosas excepciones en las que deposita su esperanza de accion catolica en la diocesis-, de la falta de fieles "con espiritu de solidariedad y de conquista", "con arraigo profundo de la idea religiosa que lleva con fuerza a la expresion social del pensamiento y de la vida cotidiana,... con elevacion verdaderamente cristiana sobre conveniencias de personas y de banderías,... con la fe iluminada que se requiere para dar razon de nuestras creencias y tapar la boca al adversario de ellas, con la prudencia sagaz para aplicar el remedio donde quiera que aparezca el mal". Para tal accion, en cuyo desarrollo abandonaba GOMA el campo ideológico para tratar de cuestiones practicas, veia el prelado diafanamente la actitud que debia adoptarse ante el nuevo panorama politico; su vision encerraba, por una parte, la confianza en ganar una positiva respuesta de las nuevas autoridades, aunque, en puridad, careciera de apoyatura alguna para fundamentarla, por otra, venia a reforzar, una vez mas, sus argumentos en favor del acatamiento y colaboracion con tales autoridades:

"... es preciso utilizar todo recurso legal cuando el caso lo reclame; tener abiertas las puertas de quienes ejerzan autoridad o simple influencia ante ella para reclamar su concurso; no engendrar prejuicios ni recelos de otro orden para trabajar tranquilamente en 'nuestro orden', que es el del apostolado cristiano. Es necesario que no se desvirtue nuestra acción a pretexto de supuestas resistencias; que lleguemos hasta donde puede llegarse en la acción de nuestro apostolado. Y para todo ello se requiere concordia, de pensamiento y voluntad, con la legítima autoridad en orden a los bienes fundamentales de la sociedad y a su ordenado régimen."

Finalizara aquí GOMA sus orientaciones sobre la actuación socio-política a realizar por los católicos ante la nueva sociedad que va a emerger, pero el término "autoridad" que acaba de transcribir conduce su pensamiento a una cuestión que aun no ha abordado: ¿qué significados había de tener para un católico de 1931 tal autoridad? En su análisis "no sabemos si conociendo o no las fundamentaciones del decreto por el que el nuevo gobierno había proclamado la elevación de ALCALA ZAMORA a la presidencia de la República-pasara el obispo a cuestionar todos los principios básicos de la democracia en una exposición que si ya recogida bajo el católico prisma de "todo poder viene de Dios" singularmente por el obispo de Palencia y, mas someramente, por el cardenal VIDAL, va a ser, con mucho, la mas minuciosamente elaborada por la jerarquía eclesiástica de la época, fundamentandola en los parrajos mas representativos de los límites en que León XIII había encerrado el reconocimiento de la legitimidad de los gobiernos democráticos:

"La autoridad argumentara GOMA- es tan natural como la misma sociedad", por serie consustancial, de ahí que, si esta viene de Dios tambien de Dios provenga aquella. Frente a esta evidencia existen ideologías, absolutamente condenar-

bles, nacidas a la luz de la revolución francesa,"⁸⁰ que defendía el poder de autodeterminación basado en el libre albedrío de los hombres:

"Vivimos bajo la nefasta influencia de las doctrinas de la falsa Reforma y de los llamados Derechos del Hombre, que suponen al hombre desgajado de Dios y a las sociedades constituidas con entera independencia de El. La sociedad, dicen, es el origen de la autoridad; por lo mismo, cada sociedad se organiza autónomamente y transfiere el poder que tiene de regirse a quienquiera que sea, que a nadie deberá dar cuenta del ejercicio de sus poderes mas que a la sociedad de quien los ha recibido."

Hendría el obispo especial interés en hacer ver a los fieles la falsedad de estos planteamientos a la luz de las enseñanzas pontificias y de cuantos, en base a ellos, pudieran entonces propugnar y defender el recién instaurado sistema democrático como paradigma de la expresión de la libertad individual, y lo haría con despectivas, difíciles, apocalípticamente pobres y, a veces, hasta incorrectas⁸¹ piruetas argumentales con las que intentaría demostrar que el individuo, como tal, no detenta ninguna parcela de soberanía, que tampoco la sociedad es origen de poder alguno y, por tanto, no transfiere lo que no le es propio; transfiere, esto sí, a modo de intermediario, el poder que, como tal sociedad, ha recibido de Dios; en base a ello la autoridad que la sociedad pueda designar no detenta el poder por su mandato, sino por mandato de Dios, de quien procede, debiendo utilizarlo, en consecuencia, con total sometimiento

(80) Entendemos que, pese a la desafortunada expresión, a esta y no al protestantismo debería referirse el prelado, ya que, a pesar de la entonces totalmente contraria postura de la Iglesia católica sobre él, carecería de lógica traerlo a colación como posible propiciador de una configuración autárquica del ser humano.

(81) No parece dejar de haber una confusión entre conceptos como propiedad y usufructo en los párrafos que más abajo transcribimos.

a la divina voluntad; la proclamada libertad individual no alcanza así a constituir realmente el poder, sino tan solo a efectuar la designación del titular en que este ha de recaer. La pretensión última de la argumentación de GOMA sería conducir a la conclusión de que toda sociedad cuya autoridad no se adecua en el ejercicio de sus funciones a los mandatos divinos, lleva en sí su propia destrucción, aunque para llegar a ella tenga que referirse a contrasentidos tales como la posibilidad de una tiranía nacida de unas votaciones democráticas u obviar el hecho de que la democracia encierra en sí la alternancia política.

Los sustanciosos argumentos del prelado en rechazo de cualquier posibilidad de un origen humano del poder, mucho más prolijos que los desarrollados por el Dr. PARRADO y con expresiones a veces contrarias a las de este, nos llevan, con independencia de que reproduzcamos en el apéndice las partes más relevantes de esta larga pastoral, a transcribirlos ahora, pese a su extensión, no sin constatar que, en puridad, el pensamiento religioso-político del Dr. GOMA no era más que fiel reflejo de la doctrina católica de la época:

"Se os ha hablado mucho de la soberanía nacional. Se os ha dicho que el ejercicio del voto es la función de esa soberanía, por la cual cada ciudadano transfiere la particula de la soberanía que le corresponde, en este aglomerado social, al candidato que un día ejercerá en vuestro nombre el poder; que el pueblo se gobierna y se obedece a sí mismo cuando se deja regir por los poderes por él constituidos.

«Estas frases halagadoras, que hacen del ciudadano rey de un momento, encierran un gravísimo error de orden filosófico y son un gran peligro para los mismos ciudadanos.

«El error está en hacer arrancar la soberanía de la libertad individual, y no es así. Esta libertad no puede tener más que una función denominadora de quien ejercerá la autoridad, no por poder del pueblo, sino por poder de Dios. Es decir, que el pueblo es soberano en el sentido de que Dios ha depositado en él, juntamente con la naturaleza social, la exigencia de una autoridad, con derecho que manifiesta con su voto, para determinar la forma de régimen social y el sujeto de la autoridad; pero el usufructo y el ejercicio de esa autoridad no son del pueblo, sino de Dios ...

«El peligro de esta fábula de la soberanía nacional está, primero, en que se vacía de Dios la sociedad, y se le suplanta con la autoridad de un hombre o de unos hombres que, por lo mismo que no ejercen el poder en nombre de Dios, podrán prescindir de Él, de sus leyes, de su religión en el régimen del pueblo que se lo ha delegado para que se lo ejerza según su beneplácito y sus conveniencias. La soberanía nacional es, bajo este aspecto, el plano inclinado para llegar al completo ateísmo del Estado. Y en segundo lugar, este poder tan crudamente humano, cortado según las exigencias del mandato colectivo, llegará a ser fatalmente el instrumento de las grandes aberraciones sociales, destructoras del común bienestar, en orden a la misma autoridad, a la religión, a los sistemas económico-sociales. La autoridad de los poderes constituidos, que habra recibido los poderes de una muchedumbre ya inficionada por el virus del error, devolverá a la muchedumbre, aumentados por la fuerza del poder público, de la legislación, de la presión, del juego interesado de los resortes del gobierno, los vicios que mancharon el origen del poder.

...

«Todo poder viene de Dios, porque no hay poder, de ninguna clase, que no sea participación del poder del Autor de todas las cosas...

«Esta potestad o autoridad reside inmediatamente, no en ningún particular, sino en toda la colección de los hombres constituidos en sociedad. Cuando la sociedad se da a sí misma un rey, o una aristocracia, o una democracia o un poder mixto para que la gobierne, sea cual fuere la forma de designación, herencia, elección, compromiso, hay una transferencia de los poderes sociales al titular o titulares del poder; pero estos no lo

ejercen por mandato del pueblo, sino como apoderados o mandatarios de Dios, fuente de todo poder, que no podrán utilizarlo sino en absoluta conformidad con la voluntad de Dios."

Por ello, fuera cual fuere la forma de gobierno que una sociedad adoptara, todo en ella habria de estar informado por el principio básico de que el poder provenia de Dios, cuya ley imponia a la autoridad civil unas normas fuera de las cuales "no hay mas que abuso de poder", negación radical de toda posibilidad de ordenación social basada en coordenadas inspiradas en la recta razón humana.

Tras estos planteamientos religioso-políticos de carácter general, volvera el obispo a reconducir sus palabras al hecho concreto del cambio de regimen en España para hacer ver a los fieles que, ante una situación que no deja de calificar con negras tintas e implícitas alabanzas de la situación anterior, Dios les concede, en primer lugar, el poder de condicionaria mediante la oración:

"Sobre nuestras cabezas ha estallado la tormenta político-social; ha derribado venerandas y seculares instituciones... Las revoluciones, se ha dicho, acaban en forma insospechada por quienes las comenzaron. Solo Dios es el Señor de la historia... Pero Dios es tan bueno, que ha querido condicionar los hechos a nuestra plegaria..."

Por ello, y pese a los duros calificativos que utilizara para definir el nuevo estado de cosas, instara a los fieles a orar y a obrar por un futuro ideal de íntima comprensión del poder eclesástico y civil, ideal que le lleva incluso a calificar de calumnia -en contra de la realidad que se se vivia- cualquier información que apunte a la posibilidad de la laicización de España, si bien los

argumentos que ahora utilizara para descalificar al gobernante que tal hiciere nada tienen que ver con sus razonamientos anteriores sobre los límites implícitos al origen divino del poder, aludiendo tan solo a unas frases de Iainé para deducir que una sociedad sin religión se encamina a la ruina. Los católicos, en consecuencia y para cumplir con tal ideal, debían seguir las indicaciones de la Iglesia, no estándoles permitido contribuir en lo más mínimo a la destrucción "de la mas pequeña de las cosas santas de nuestra religión o de aquellas otras cosas, matrimonio, familia, escuela, instituciones sociales, etc. íntimamente trabadas con la religión", enumeración con la que el obispo se adelantaba a los previsibles derroteros que podía seguir la nueva organización social y reclamaba el derecho de la Iglesia a determinar los principios de sus mas esenciales instituciones.

Un peligro veía el obispo alzarse contra este derecho y de él quería advertir a sus fieles, como si su pastoral, en una simplista y errónea visión de la realidad social, pudiera solo dirigirse a un hipotético y elitista orden de creyentes: "el pobre pueblo", detentador de unos derechos propios de ciudadanos, nada sabía de cuestiones de carácter doctrinal, y por ello, el ejercicio de estos derechos en sus manos ignorantes se convertía en "arma terrible que puede inconscientemente esgrimirse contra la verdad y la moral"; el pueblo, pues, podía actuar contra la Iglesia porque, además de falta de cultura, era manipulado por "los directores de partidos políticos con programas disolventes, en religión como en el orden moral y económico social"; ante tal posibilidad los católicos debían proceder "con la conciencia ilustrada por las verdades de la religión y por la verdadera ciencia en el orden social y político". Utopica visión y utópica dicotomía con la que el obispo, intentando reforzar sus argumentos en pro de la correcta actuación política de los fieles, reconocía implícitamente que la

propugnada religiosidad de la nación española, amén de simplista, podía ser, en sus más amplios sectores, cuestionable.

Pero esta alusión al "pobre pueblo", esta referencia al orden-económico social, conducen seguidamente la pluma del Dr. GOMA a unas consideraciones que, destinadas, en principio, a ese sector de fieles al que sus palabras se encaminan, acabaran razonando sobre aquellas doctrinas económicas que más podían incitar la actuación de las masas como si pretendiera, precisamente, convencer a ese "pobre pueblo" de los errores con que podía ser embaucado. Los fieles, comenzará diciendo (con un juicio de valor cuya formulación, amén de un cierto matiz despectivo, parece volver la espalda a las legítimas reivindicaciones sociales entonces planteadas -en una cierta contradicción con sus anteriores palabras sobre este extremo- y a toda madura aspiración de ciudadanía, como si estos pudieran ser temas ajenos a la actuación de la Iglesia, salvo en ese plano doctrinal en que el obispo los plantea), los fieles deberían estar especialmente atentos a sus deberes políticos relacionados con el orden económico social, pues "los derechos políticos les importarían poco a las muchedumbres si tras ellos no vislumbraran el mejoramiento económico"; la prueba de ello será, según afirma al mes escaso de proclamada la República, que "en estas regiones, se cuentan por miles los desencantados por el hecho de que sus votos no se hayan ya traducido en pan, más abundante y mejor". Expresamente dice que "no quiere calificar" las reivindicaciones que realmente existen, pero, por ellas, quiere exhortar a todos, "industriales y gente de campo ... a no separar de la religión y de la moral las cuestiones económicas de orden social, y menos en la forma en que hoy se plantean", formas que subvierten lo que para el prelado son los conceptos cristianos de propiedad, trabajo, riqueza..., en lo que ha dejado de ser una "querrela" centro

de la familia cristiana para pasar a ser una lucha entre el cristianismo y las doctrinas anticristianas:

"Porque ya no se trata de una querrelia de justicia, equidad y caridad dentro de la familia cristiana -y ya veis que por este concepto entran en juego los principios de la moral y del derecho- sino que la lucha se ha establecido hoy entre la doctrina cristiana y las multiples doctrinas anticristianas que forcejean para apoderarse de vuestra inteligencia y subvertir en nuestra conciencia social los conceptos tradicionales cristianos de propiedad, trabajo, riqueza, distribucion, etc. etc."

Todas estas doctrinas serán para el obispo "muy desagradables" por cuanto encerrarían en una muy simplista reduccion, "la pasion de tener o aumentar lo que se posee". Frente a ellas, y sin extraer, una vez mas, las consecuencias claras de sus palabras y el alcance que el concepto de justicia social podria tener segun el evangelio en el entramado economico-social de la época, insistirá el obispo en que los catolicos tendrian que saber discernir "los eternos principios de la justicia", guardandose de ejercer sus derechos "en forma que contribuyais a una solucion de injusticia social".

Aquí se quedará GOMA, dejando solo entrever con sus inconcretas frases, el deber de los catolicos de abstenerse de coadyuvar a la defensa de cualquier principio de indole marxista; es, no obstante, consciente de que sus etéreos razonamientos pueden ser un punto contradictorios ¿no es acaso la defensa de la justicia social la principal base de esas doctrinas que quiere descalificar? Por esto, pasará a apuntar como, en definitiva, es la Iglesia la que ha hecho "el esfuerzo maximo y de mayor eficacia para el establecimiento de la verdadera justicia social" y que "todo lo que de mejor tienen las novisimas escuelas que traen revuelto al

mundo, de la Iglesia lo recibieron", para concluir, sin mas fundamentaciones, que "es un conato de suicidio social dejar la verdad por la utopia en estas vitalisimas cuestiones, cesarirse de Dios y de su Hijo Jesucristo para lanzarse al vacio de los ensueños humanos".

Llegando ya a la recta final de la pastoral y como conclusion de sus extensas consideraciones, pasará el obispo a señalar las directrices a las que habrán de atenerse los fieles ante las proximas elecciones; por ellas, y como primera instancia, rechazará "por absurda, la libertad absoluta de la conciencia politica..., la doctrina de la supremacia de la conciencia como regla suprema de conducta personal", descalificando pues, la madurez civil, e incluso religiosa de los catolicos; actuar segun tal principio equivaldria, para el prelado, a "hacer tabla rasa... de los eternos principios de la justicia y de la religion..., para entronizar en su lugar el capricho de cualquier idolo". Los ciudadanos catolicos, partiendo de tal premisa, debían ceñirse a los principios que pasaba a enumerar. En primer lugar debían cumplir con el deber de votar y ello porque los votos determinaban a "quienes querran o no querran, sabran o no sabran, fomentar el bien, la religion, la moral, la justicia, en todas las instituciones y en las formas complejas del gobierno del Estado" (frase con la que, ahora si, esboza el prelado, por connexion, el concepto del "bien"). En segundo lugar, debían votar "en favor de los buenos", que eran aquellos que mas garantias ofrecieran "en orden al bien comun, que es el fin de la sociedad civil, y al bien espiritual, que es el fin de la sociedad religiosa", siendo este "uno de los negocios, como tantos hay, que caen bajo la potestad 'indirecta' de la Iglesia", por lo que, apuntaba podian incurrir en pecado los que así no obraran o, dadas las circunstancias, se abstuvieran. Salvas estas premisas, poco importaba "el caracter politico del candidato" con tal que conviniera "en la idea religiosa y

moral de la Iglesia", a cuya autoridad debían subordinarse, "en aquellos puntos que son de su jurisdicción, directa o indirecta", con sujeción absoluta al papa y a la dirección de los obispos, por ser más graves los deberes que, frente a toda potestad, llegaban a los católicos a la espiritual de la Iglesia, que "ni indirectamente" había recibido de los hombres sus poderes "sino directamente de Dios".

Terminará GOMA su pastoral con unas admoniciones especiales para los sacerdotes, a quienes recomendará "prudencia suma" y unidad de acción en su ministerio, en el que no debían dejarse influir por "errores o doctrinas extraños a nuestra comunión"; la principal misión que encomendará al clero será la de "educar las conciencias", lo que habían de efectuar en actitud defensiva de la grey que tenían encomendada, siendo "muro de bronce que contenga la invasión del error y del mal", que ahora se presentaba en formas desconocidas para los que les precedieron en su ministerio, debiendo permanecer ajenos a toda atadura partidista para cumplir tal misión.

La actitud que debían mantener con las autoridades constituidas había de moverse en el plano de una correcta colaboración que siempre debía ceder ante posibles colisiones con los preceptos divinos:

"Con las autoridades, cualesquiera que sean si son legítimas *-etiam dyscolis-* sed obsequiosos, reverentes, y con ellas laborad, en mutua concordia, en pro de la religión y de la patria... Con dignidad, sin gesto adulator, que rebaja; pero con santa libertad cuando se trata de los fueros de Dios y de la conciencia. A veces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres."

No parece esperar el obispo un desarrollo prometedor de estas relaciones y, así, no dejará de referirse a lo que ve

como incierto futuro, si bien queriendo transmitir palabras de heroico aliento para su clero al que quiere estimular con las siguientes frases, llenas de contundentes vaticinios:

"Porque si esta de Dios que seamos probados, os prometemos, con el Apostol, en nombre de la fidelidad de Dios que no miente, que no sufriremos mas que una tentacion proporcionada a nuestra miseria... y que con la prueba nos vendra el refuerzo divino, bastante y sobrado para que podamos aguantar..."

Finalizada la pastoral, y siguiendo la pauta marcada por el resto del episcopado, aunque con una ambigüedad y retorica mas acusada, como de su pluma cabia esperar, incluiria GOMA una serie de mandatos especificos para el clero, comenzando por el establecimiento de preces especiales "para mientras duren las actuales circunstancias, por la prosperidad de la Iglesia y de la patria", y recomendando seguidamente la intensificacion de la instruccion religiosa y la piedad, la prudencia en la predicacion y en la conversacion con los seglares, la deferencia con las autoridades y, en fin, la no intervencion en actos politicos y el uso de sus derechos civicos de acuerdo con las ensenanzas contenidas en la pastoral, segun las cuales deberian orientar las conciencias de los fieles que tenian encomendados.⁽⁴²⁾

(42) 10 de mayo de 1961, "Carta pastoral sobre los deberes de la hora presente" BOE de Tarazona y Tudela, año 27, 15 de mayo de 1961, num. 663, pags. 345-360. En carta dirigida a NIOAL el 15 de mayo GOMA le comunicaba el envio de un ejemplar de esta pastoral, lo que parece evidenciar tanto la complacencia del futuro primado en sus escritos como la consideracion que merecia el Cardenal. A la Jefatura *España y Eclesia durante la segunda...*, pags. 59-60. Incluidos en el *Memorie* num. 6 los parrafos mas relevantes de esta pastoral.

3. El documento colectivo de 9 de mayo de 1931 y la primera salida de España del primado.

Puestos en la balanza las ventajas e inconvenientes de una reunión de metropolitanos, según se habían examinado por la conferencia episcopal de la provincia tarraconense, se inclinó VIDAL por su celebración y, contestando a la circular de SEGURA de 17 de abril, le expondría, ya en 1 de mayo, que creía "de suma conveniencia" tal encuentro, no sin aludir a las cautelas con que debía revestirse, añadiendo -en la misma fecha en que la detonante pastoral del primado iba a ser publicada- que, dada la suma trascendencia de las inminentes elecciones, era "muy delicado publicar documentos"⁽⁶³⁾ y que "si acaso tendría que ser uno colectivo, muy sobrio y de tonos elevados".⁽⁶⁴⁾

Con independencia de que esta carta fuera o no recibida por el primado⁽⁶⁵⁾ este comunicaba a VIDAL el día 6 (circular num. III) que, "por orden expresa de la Santa Sede", debería celebrarse a la mayor brevedad dicha reunión y que la misma tendría lugar en Toledo el día 9.

(63) Ya hemos visto el parecer contrario a cualquier publicación recogido en los acuerdos de la conferencia de la provincia tarraconense. La modificación de la postura del cardenal VIDAL al redactar su circular del día 4 vendría motivada, sin duda, por la recepción de las instrucciones del Vaticano de 29 de abril.

(64) *Esglesia i Estat durant la segona...* I, págs. 30-31.

(65) Indican los recopiladores de archivo de VIDAL que, al no existir respuesta a esta carta se ignora si fue enviada, *ibidem*.

A esta conferencia extraordinaria de metropolitanos asistieron los cardenales SEGURA, VIDAL⁽⁸⁶⁾ e ILUNDAIN, los arzobispos GANDASEGUI, MELO Y DOMENECH y el obispo BASULTO, de Jaen en representacion de la archidiócesis de Granada cuya sede estaba vacante, adhiriéndose a los acuerdos que se adoptaran, por imposibilidad de asistir, el arzobispo de Santiago, Zacarias MARTINEZ y el Patriarca de las Indias; el arzobispo de Burgos, Manuel DE CASTRO, "ni se excuso ni asistió", segun se hace constar en el acta.

Entre los acuerdos adoptados por los metropolitanos destaca el interes de SEGURA, ya manifestado, como hemos visto, en su circular del día 4, de que el resto de la jerarquia se adhiriera a su actuacion y se hiciera eco de lo que el redactor del acta- apunto como "persecucion por parte del Gobierno".⁽⁸⁷⁾ Tambien se convino en pasar a publicar un documento colectivo de orientacion a los fieles -el primero de la Republica-, que habia de ver la luz simultaneamente en todos los boletines diocesanos del 15 de mayo y que el cardenal SEGURA elevara al presidente del Gobierno provisional una exposicion en protesta de las violaciones, efectuadas o anunciadas, de los derechos de la Iglesia, documento este sobre el que no se expreso parecer alguno -como claramente se habia especificado respecto al anterior- sobre la conveniencia o no de darle publicidad.

(86) Muntanyola señala que la convocatoria de la reunion por SEGURA para una fecha tan próxima hacia "bien difícil" la asistencia de VIDAL, pero que este tomó el avión "contra toda costumbre". (Ramon Muntanyola, *Vidal y Barrquer, el cardenal de la paz*, Barcelona, 1974, pág. 189).

(87) En la carta que VIDAL envió a PACELLI el 27 de junio le exponia su impresion de que el cardenal SEGURA deseaba que todos los metropolitanos hicieran suya su pastoral del día 1, "tan mal recibida e interpretada por el Gobierno", añadia el de Tarragona que los metropolitanos no habian tenido noticia previa de la misma concluyendo que o bien porque SEGURA no expresó claramente su deseo o bien "porque no se considerase prudente ni fructuosa, de momento, una ruptura con el Gobierno, no recayó acuerdo sobre el particular ni directa ni indirectamente". (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 84-86).

El resto de los acuerdos -con independencia de la elevación de un mensaje de adhesión al papa- versaron sobre la presentación de sacerdotes como candidatos a las nuevas cortes constituyentes, procesiones y demás actos religiosos en la vía pública, y situación de los bienes eclesíasticos.***

(88) Dada cuenta por el Presidente de la Conferencia del objeto de la misma, se tomaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

"I. Enviar una carta de adhesión incondicional a Su Santidad, en nombre de todo el Episcopado.

"II. Adherirse en absoluto al Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, mostrándose plenamente conformes por su actuación y rondoliéndose de la persecución de que es objeto por parte del Gobierno.

"III. Se aprobó una declaración colectiva pastoral de los Rvdmos. Metropolitanos en nombre propio y conforme al sentir del Episcopado. Esta declaración habrá de publicarse en todos los Boletines Eclesiásticos al mismo tiempo, en el número correspondiente al quince de Mayo.

"IV. Se acordó que en nombre de los Rvdmos. Metropolitanos suscriba el Cardenal Arzobispo de Toledo una exposición al Presidente del Gobierno provisional protestando de la violación de diversos derechos de la Iglesia ya llevada a cabo o anunciada oficialmente. El texto de [la] referida exposición fue aprobado.

"V. Con relación a la presentación de Sacerdotes para candidatos en las Cortes Constituyentes, se acordó que se guarde el canon 139, par. 4, expresando el deseo de que vayan a las Cortes Constituyentes idóneos para tal cargo, habida cuenta de las circunstancias presentes y combinando con la suspensión a divinis al que no cumpla con las condiciones del citado canon.

"VI. Con respecto a las manifestaciones externas del culto en la vía pública, v.gr. las procesiones, se creyó lo más prudente no establecer una norma fija, sino que cada Rvmo. Prelado se atempere a las circunstancias locales.

"VII. Respecto a los bienes eclesíasticos, se acordó que se transmita a los Rvdmos. Prelados copia del estudio hecho por el Letrado Asesor, habiendo en su día de estar a las instrucciones que pudieran tal vez darse por la Santa Sede."

Dada la premura del tiempo con que se celebró esta Conferencia, se acordó que extendiera el acta al Presidente, y que diera cuenta de ella a la Santa Sede, y oportunamente a los Rvdmos. Prelados. (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 45-46)

Al día siguiente de celebrada la conferencia publicada "El Sol", en primera página, una noticia bajo el titular "En

con objeto de dar cumplimiento a lo acordado en el punto 7 varios prebados publicaron en sus Boletines un "Aviso" para los sacerdotes, este fue idéntico en los Boletines de Valencia 17 de junio de 1931, num. 2124, pag. 1631; Sevilla año 74, 19 de junio de 1931, num. 1182, pag. 2061 y (uy año 72, 15 de junio de 1931, num. 10, pag. 252) y, con ligeras variaciones, Zaragoza año 70, 16 de junio de 1931, num. 12, pag. 2211:

"MONIUM"

Evade clericis liceat ex concessione a gubernio nuper acta deputati munus coire, nec non videt munus hoc prudenter gestum in maximum posse cedere proventus ecclesiarum, tum Matris Hispaniae, Iamen, ut sacri canones circa hanc materiam admissa servantur, clerici nec sollicitare, nec attentare praesumant deputati officium absque licentia Ordinarii, et omnibus praerequisitis servatis ad normam can. 129, parag. 4; sub poena suspensionis a divinis."

Al permitir recientemente el Gobierno a los clérigos ejercer el cargo de diputado, no se piensa que este cargo ejercido prudentemente no pueda servir de mucho provecho tanto para la Iglesia como para la patria española, sin embargo, para que los sagrados cánones sobre esta materia se observen con cuidado, los clérigos no deben arrogarse solicitar o desempeñar el cargo de diputado sin licencia del Ordinario, y todos los requisitos observados en la norma del canon 129, parágrafo 4; bajo pena de suspensión a divinis.

Respecto al punto VI, la celebración solemne más inminente era la procesión del día de Corpus, sobre este extremo BAILLURI y ARBÉULA indican que el gobierno provisional había permitido tal procesión pero que, según "El Ulisuvio" de Barcelona de 9 de junio, esta solo se había celebrado en Barragona, Toledo, Lugo y Guadix *especial a Astar durant la segona...*, 1, pag. 13, nota 13. En relación con tal hecho el cardenal VIALI indicaba a REUSCHINI en la carta de 15 de junio, que había hablado con los gobernadores civil y militar y con el alcalde de Barragona para garantizar la procesión, añadiendo que se había celebrado "con toda solemnidad, gran entusiasmo y mucha asistencia, más que en los años anteriores..." (ibidem). Hese a la reseña de "El Ulisuvio" citada, los boletines diocesanos, amen de referirse en estas fechas a otros actos externos de culto, trataban también de la solemnidad y concurrencia con que se había celebrado la festividad y procesión del Corpus, tal harían, entre otros, los de Sevilla, si bien, por lo que a la capital respecta, se había celebrado tan solo por el claustro de la catedral, aunque la extensa crónica del boletín eclesiástico resaltaba la gran asistencia de fieles—unos quince mil en total y de ellos ocho mil hombres, dato este último que los boletines estaban relevante destacar como forma de evidenciar que la fe en España no era cuestión exclusiva de mujeres como muchos pretendía, si bien la tradición hacía que en esta procesión formaran principalmente hombres, hasta el punto de que en algunas localidades, como veranos en Palencia, anteriormente no asistían mujeres—y las calurosas muestras de afecto tributadas al prelado, i.e., "Agradecimiento y bendición del prelado" y "Tronica diocesana. La procesión solemne del Corpus Christi". BUE de Sevilla, año 74, 19 de junio de 1931.

torno a la pastoral del Primado. Los cardenales españoles se unen a monseñor Segura en sus oraciones". En ella cabe

num. 1182, págs. 205-206 y 210-216); Pamplona, que destaca la presencia de las autoridades locales, contrariamente a lo que sucedería, en la generalidad de los casos, en las procesiones de otros lugares (s.f., "Circular", BDE de Pamplona, año 70, 15 de junio de 1931, núm. 1312, págs. 255-256); Vitoria (s.f., "Crónica diocesana, La festividad del Corpus Christi y su Octava", BDE de Vitoria, año 67, 15 de junio de 1931, núm. 14, pág. 409); Palencia, boletín que resalta que "aparte la presencia de muchos caballeros, en número poco frecuente" hubo "contra toda costumbre la de no pocas señoras, quienes supieron compensar con creces ausencias bien lamentables" (s.f., "Crónica diocesana, El Corpus en Palencia", BDE de Palencia, año 61, 1 de julio de 1931, núm. 14, págs. 442-447); Segovia (s.f., "La procesión de la Minerva", BDE de Segovia, año 76, 15 de junio de 1931, núm. 111, pág. 238) y Coria, boletín que destaca como la procesión había sido mucho más solemne que en años anteriores, "como si el conjunto de circunstancias que han surgido alrededor de lo que está así hondamente arraigado en el alma española, hubiera producido un ambiente propicio para una manifestación de religioso fervor, no precisamente en las mujeres, sino en los hombres, los cuales formaron en la procesión en mayor número que otros años", y que tras señalar, con una alusión que evidencia la superficialidad religiosa de la época, que "las personas más distinguidas y de mayor relieve social" se habían turnado para llevar el palio, informaba que no habían asistido "elementos oficiales" ni formación de los elementos militares de la población", ausencias que, reiteraba, se habían paliado con la numerosa asistencia de hombres (s.f., "Crónica diocesana, La fiesta del Corpus en Coria", BDE de Coria, año 66, 1 de junio de 1931, núm. 12, págs. 190-192).

Aunque no hemos encontrado reseña de la procesión, el arzobispo de Valladolid, Dr. Remigio GARCÍA-SERVI, había decretado que esta se celebrara el día de la fiesta siguiendo "la carrera de años anteriores" (26 de mayo de 1931, "Edicto del Provisorato sobre la procesión del Corpus", BDE de Valladolid, año 56, 28 de mayo de 1931, núm. 5, págs. 59-61). Frente a esta disposición destacan, sin embargo, las citadas por los obispos de Salamanca, indicando que si en alguna parroquia había dificultades para celebrar la procesión, que tenía lugar dentro de la octava de la fiesta, autorizaba su omisión (30 de mayo de 1931, "Circular", BDE de Salamanca, año 78, 1 de junio de 1931, núm. 6, págs. 167), y de Tuy, señalando, igualmente, que la procesión del Corpus había de celebrarse dentro de la octava de la festividad y expresando su esperanza de que pudiera realizarse en todas las parroquias "mas donde hubiere alguna grave dificultad, omitase la procesión, si la dificultad no se puede orillar": instrucción a la que añadía el Dr. GARCÍA unas recomendaciones que no hemos encontrado formuladas por otros prelates:

"... todos, sacerdotes y seglares, cuantos de alguna manera intervengan o puedan influir en la preparación y organización y celebración de Procesión, con toda diligencia procuren que no haya nada ni en adornos ni en colgaduras ni en cantos ni en la música que pueda dar motivo o pretexto racional a interpretaciones inconvenientes. Es de todo punto necesario que vean que los actos religiosos son actos religiosos y nada más y que los católicos sean ciudadanos que cumplamos perfectamente y con sinceridad las órdenes del Papa: respeto y obediencia al Poder constituido.

cuenta de que los cardenales ILUNDAIN, MELO y VIDAL habían visitado al primado y que los cuatro purpurados habíanorado

«Uremos y laboremus todos cuanto podamos, para el mantenimiento del orden y para el bien común de nuestra Patria amadísima, pues dentro de ese orden podrá conservarse la vida cristiana y aumentarse para mayor prosperidad de España y de la Iglesia.»

«15 de mayo de 1931, "Circular, sobre las solemnidades del Corpus", BUE de Iuy, año 12, 23 de mayo de 1931, num. 9, pag. 21/3.

Este boletín publicaría también, ya en 30 de julio, la reseña de la celebración de la procesión en la capital de la diócesis, que hubo de efectuarse por el claustro de la catedral a causa de la lluvia («1. "Crónica diocesana, la fiesta del Santísimo Corpus Christi", BUE de Iuy, año 12, 30 de julio de 1931, num. 13, pags. 321-322).

Debe complementarse las noticias publicadas por los boletines diocesanos con la que, respecto a actos externos de culto, dio aquellos días la prensa, así "El Sol", en 15 de junio, señalaba como "L'Observatore Romano" publicada el día anterior, en su primera página, una extensa nota sobre la reanudación de la vida religiosa en España y en la que se subrayaba "la brillantez de las numerosas procesiones celebradas en las ciudades españolas con motivo de la festividad del Corpus Christi", nota en la que también aludía a las numerosas protestas que se habían formulado con motivo de los incendios del mes de mayo y a las elevadas en las ciudades cuyos Ayuntamientos habían votado la expulsión de los religiosos. ("El Sol", 15 de junio de 1931). Antes de ello "El Debate" se había referido a la celebración en León, "sin ningún incidente y con brillantez, de la procesión de la Divina Pastora, organizada por la congregación de sirvientes", a ella habían asistido "muchísimas de estas" y el público se había mostrado "respetuosísimo" ("El Debate", 6 de mayo de 1931); este mismo periódico daría también la noticia de la suspensión de la procesión del Corpus en Madrid, publicando la circular de la Secretaría de Cámara del obispado aparecida en el boletín diocesano de 1 de junio, («1 de junio de 1931, "Circular", BUE de Madrid-Alcala, año 46, 1 de junio de 1931, num. 1856, pags. 205-206) reveladora de las distintas relaciones que se mantenían en las diversas diócesis entre las autoridades locales y el episcopado:

"La procesión que para solemnizar la fiesta del Santísimo "Corpus Christi" recorría las calles de Madrid, se suspende este año

Tradicionalmente la organizaba el Ayuntamiento, asistían todas las autoridades y las fuerzas del Ejército concurrían a la brillante solemnidad, cubriendo la carrera y rindiendo armas a Jesús sacramentado.

No puede hacerse lo mismo ahora, y aunque numerosísimos fieles y las Asociaciones piadosas habrían formado gustosos y entervorizados en la procesión y el gobierno provisional de la República habría amparado el derecho a celebrar este tradicional acto del culto, se ha creído más conveniente, por varias y graves razones, suspenderlo este año"

juntos en la catedral. Añadía el periódico que "elementos eclesíasticos toledanos" negaron que hubiera tenido lugar

La circular expresaba, a continuación, el deseo del obispo de celebrar actos de culto solemnes en todas las iglesias de la diócesis y que en ellos se implorara "por el bien de nuestra Patria, por la paz de los ánimos, por la conversión de los enemigos de nuestra Santa Religión y en amoroso desagravio de los sacrilegios que tanto y tan asazagamente han contristado los corazones cristianos". Incluso el mismo diario la noticia de la salida de la procesión del Corpus en Almería, en la forma de costumbre, para lo cual el prelado había visitado al gobernador y éste le había ofrecido pedir a la "Guardia Civil" su colaboración para asegurar el orden ("El Debate", 3 de junio de 1931). El cinco de junio se referiría el periódico al transcurso de esta festividad en las distintas ciudades españolas, reseña que trasladamos resumidamente en el apéndice de "documentos complementarios" de este capítulo (ver el núm. 2). También "El Debate" resaltaría la solemne celebración en Pamplona de la festividad del Sagrado Corazón y de la "gran concurrencia de fieles" al Cerro de los Angeles donde se había reiterado el ofrecimiento "de la España católica al Sagrado Corazón"; indicaba a continuación el diario como en diversos puntos se había celebrado la festividad con procesiones o cultos solemnes y citaba expresamente los actos de Vitoria, Santiago y Huelva, no sin dejar de destacar que en Bilbao el Gobernador no había dado autorización para la procesión, pero que los balcones de la ciudad habían sido engalanados y los templos habían estado muy concurridos de fieles, ("El Debate", 13 de junio de 1931). La siguiente noticia de este periódico se refiere a la prohibición de todas las procesiones realizada por el Gobernador civil de Castellón de la Plana y que, para efectuarlas, debía solicitarse permiso con cuarenta y ocho horas de antelación, este hecho había dado lugar a la suspensión de muchas de ellas, algunas muy tradicionales, por lo que reinaba "gran disgusto" ("El Debate", 20 de junio de 1931). Nuevamente se referiría el diario al tema de las procesiones para indicar que en Huesca, durante la procesión de la Virgen del Carmen "unos alborotadores acometieron a los fieles a pedradas", por lo que el Gobernador civil, que no había hecho nada para evitarlo, había publicado una nota oficiosa en la que declaraba su propósito de prohibir las procesiones, porque suponían "un alarde de ostentación que puede herir los sentimientos de aquellos ciudadanos que profesan otro credo confesional, o sean simplemente librepensadores", sobre ello comentaba el periódico: "Esta interpretación 'oficial' del régimen de libertad de cultos es digno complemento de la salvaje agresión de la calle" ("El Debate", 23 de julio de 1931). Por último se referiría el diario en este período a la cuestión de los actos externos de culto insertando la noticia de que en Vigo se había triplicado la cantidad necesaria para sufragar los gastos de la procesión del Cristo de la Victoria, cantidad que siempre sufragaba el Ayuntamiento y que, en esta ocasión, al dejar de hacerlo la corporación, había corrido de cuenta de los fieles, que aun seguían entregando donativos; a la procesión habían acudido "más de diez mil fieles" siendo guardado el orden por grupos de hombres y habiendo sido detenido por "los guardias, uno que intentaba alborotar", ("El Debate", 29 de julio y 3 de agosto de 1931). También en Segovia las mujeres católicas de la ciudad habían sufragado la salve a la patrona de la ciudad que venía siendo tradicionalmente costeada por el Ayuntamiento, que asistía al acto en corporación, según indicaba el tronista se había celebrado "con el templo rebosante de fieles" pues este homenaje "no debía, no podía faltar por voluntad del pueblo" (s.f. "Una salve a la patrona", BGE de Segovia, año 76,

tal reunión y que todo se había limitado a mensajes telefónicos de los cardenales manifestando a SEGURA que se unían a él en sus oraciones. Por último resaltaba el que "no había tampoco en las esferas oficiales informe alguno sobre este asunto" y que "Uno de los ministros consultado por los periodistas, dijo que la cuestión de la Pastoral del Primado se estaba tramitando por las vías adecuadas y que entendía que ningún incidente ni manifestación de otros dignatarios de la Iglesia había venido a interrumpir este trámite".⁽⁸⁹⁾

Tal como se ve, los metropolitanos no quisieron dar publicidad alguna a la reunión, sigilo este que dio lugar a estas interpretaciones de la prensa. A este "llamar la atención lo menos posible" ya se había referido VIDAL en la carta redactada para SEGURA el día 1, si bien, queriendo no despertar suspicacias a nivel oficial, había apuntado la conveniencia de que el nuncio la preparase "diciendo al Ministro que los Arzobispos debían reunirse para que transmitieran las instrucciones de obediencia y respeto al poder constituido, haciéndole saber la costumbre que tienen los Metropolitanos, de conformidad al derecho y a lo que se practica en otras naciones, de reunirse con frecuencia".⁽⁹⁰⁾

30 de junio de 1931, num. 12, pag. 253). Queremos acabar este breve comentario de las manifestaciones religiosas de los inicios de la República aludiendo, por último, a la crónica publicada por el boletín diocesano de Palencia en la que, reseñando todos los actos piadosos de la segunda quincena del mes de mayo (novenas, fiesta de San Isidro con procesión por las calles de la capital, fiesta de Pentecostés, etc.), no dejaba de destacar la piedad y asistencia de los fieles. (s.f.). "Crónica diocesana.- Movimiento religioso de la quincena". BOE de Palencia, año 61, 1 de junio de 1931, num. 11, págs. 367-368).

(89) "El Sol", 10 de mayo de 1931.

(90) Un párrafo similar a este incluía VIDAL en su carta a TEDESCHINI de 2 de mayo. *Església i Estat durant la segona...* 1, págs. 31-32.

Por la referencia de "El Sol" no parece que las cauteías apuntadas por VIDAL llegaran a adoptarse, y, desde luego, todo el interés en mostrar una actitud deferente hacia el gobierno y en no realizar gesto alguno que pudiera interpretarse como provocación por parte de la Iglesia, sería totalmente trastocado por la posterior actuación del cardenal SEGURA.

Aprovechando su regreso de Toledo había recalado VIDAL en Madrid donde visitó al nuncio TEDESCHINI y, siguiendo el criterio de este, que el mismo cardenal compartía, a ALCALA ZAMORA, con quien, según exponería el 27 de junio en la carta enviada al Secretario de Estado Vaticano, cardenal FACELLI, mantuvo una larga entrevista en la que el presidente le manifestó sus deseos de llegar a una solución de armonía con la Iglesia y no dejó de lamentarse del proceder de SEGURA.

Estas gestiones del arzobispo de Tarragona fueron motivo de que tuviera conocimiento directo de la revuelta anticlerical y de la violenta quema de iglesias y conventos que había de afectar a la capital y a otros muchos puntos de España, describiendo en la mencionada carta a FACELLI sus zozobras para salir de Madrid y las gestiones inmediatamente seguidas ante las autoridades catalanas a fin de evitar que en Cataluña cundiera el ejemplo que asolaba a tantas otras zonas del país.⁽⁹¹⁾

No es de extrañar que la angustia sentida por el arzobispo de Tarragona y la que, como también expresaba en

(91) *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 84-86.

su carta al Secretario de Estado vaticano, se extendió por todos los conventos y colegios religiosos de España, hicieran mas nalla donde mas razones habia para sentirla, llegando a provocar, incluso, la precipitada huida de dos altos dignatarios de la Iglesia, uno fue D. Manuel GONZALEZ y GARCIA, obispo de Malaga, ciudad en la que, ante la pasividad de las autoridades, ardieron un buen numero de edificios religiosos y, entre ellos, el mismo palacio episcopal, lo que provoco que el prelado, atemorizado por los hechos, buscara refugio en Gibraltar; el otro fue el primado de España, D. Pedro SEGUERA y SAEZ.

Asi relato el boletin eclesiastico de la archidiócesis toledana las razones de la huida del cardenal.

"El nombre del Sr. Cardenal seguia rodando en parte de la prensa, acompañado de mal disimuladas invitaciones a emplear contra el la fuerza y la violencia. En Toledo mismo se respiraba tal ambiente de amenaza, que fue preciso que Su Eminencia, en compañía de su anciana madre, buscase lugar mas seguro. En las mismas calles de Madrid se ponian pasquines excitando a la plebe contra el Sr. Cardenal que, al fin, ante el peligro a que estaba expuesta su vida, prefirió ausentarse algun tiempo de España ...

"Su Eminencia Reverendísima salió de Madrid el día 13 de mayo. Despues de brevísimo descanso en Hendaya, se dirigió a Lourdes, donde pasó varios días, encaminándose por fin a Roma." (92)

La version dada por el boletin de Toledo no parece del todo exacta, ya que, como indica ARBELLOA, a raíz de la publicación de la pastoral de 1 de mayo "el nuncio hubo de pedir al cardenal Segura, a iniciativa del Gobierno, que sa-

(92) S.E. BOE de Toledo, 28 de junio de 1933, núm. 12, págs. 176-177.

liera de España..."" es probable, no obstante, que el desencadenamiento de las violentas actitudes anticlericales causantes de los incendios de 11 y 12 de mayo, aceleraran la decisión del primado.""

Antes de su precipitada marcha pudo disponer, sin embargo, la publicación en el boletín eclesiástico de su archidiócesis de la declaración colectiva redactada en la conferencia de 9 de mayo. La misma precipitación parece que fue también la causa de que no remitiera con la antelación debida, según lo acordado en la citada conferencia, la correspondiente copia de la declaración al resto de los metropolitanos, a fin de poder proceder a la convenida publicación simultánea; de ello resultó que la declaración vio la luz en el boletín toledano el día 16 de mayo, "" en forma aislada y sin conexión alguna con el resto de las

-
- (93) ARBELLOA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931)*, Barcelona, 1976, pág. 15.
- (94) Conociendo, pues, el Gobierno desde el primer momento el viaje del cardenal, dio orden al Gobernador civil de San Sebastián para que le facilitase el paso de la frontera, llegando este "a invitarle a salir cuanto antes de España" (Ver en el apéndice núm. 3, la reseña que de la partida del primado hizo "El Sol" el 14 de mayo).
- (95) El BUE de Toledo del 16 de mayo contenía también una pastoral del primado de carácter exclusivamente religioso, fechada el día siguiente de la conferencia, y de la que, en todo caso, cabe destacar estas frases: "Hoy, más que nunca, confiamos que la promesa del Sagrado Corazón de Jesús de reinar en España se cumplirá. Por difíciles que aparezcan los tiempos; por mucho que los enemigos se esfuerzen; aunque veamos avanzar las oleadas del mal y desbordarse los torrentes de las pasiones, no perdamos ánimos. El que dijo 'Ego vici mundum', 'Yo he vencido al mundo', no ha perdido su poder ni renuncia a reinar sobre los hombres y sobre los pueblos" (10 de mayo de 1931, "Carta Pastoral de Su Emcia. Reverendísima sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús", BUE de Toledo, año 87, 16 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 155-160). No es necesario insistir en el juicio implícito que estas frases encierran sobre la situación que, para el primado, creaba a España el nuevo régimen político y los anunciados proyectos del Gobierno.

diócesis, lo que vino a crear una nueva e importante confusión tanto en los ambientes republicanos como, en este caso, entre la propia jerarquía según nos consta por el mismo cardenal VIDAL.

De esta forma el texto de la Declaración colectiva apareció en el boletín eclesiástico de Toledo con un mes de antelación, como mínimo, a su publicación en los restantes boletines, no publicándose en la mayoría de estos hasta fechas demasiado cercanas a las elecciones generales para que el clero pudiera transmitirlo debidamente a los fieles, en otros, incluso, esta publicación se efectuó una vez transcurridas aquellas,*** de ahí la escasa virtualidad que

(96) En el boletín oficial eclesiástico del arzobispado de Tarragona no aparecería hasta el núm. 13, del día 30 de junio (págs. 249-251) cuando, como señalan BATLLORI y ARBELLOA, el cardenal VIDAL, a fin de cumplir los acuerdos adoptados en la conferencia de metropolitanos, había encargado precisamente desde Madrid a su vicario general que anticipara dos días la publicación del boletín para que la declaración colectiva pudiera salir en la fecha prevista (*Esglesia i Estat durant la segona...*, pág. 73, nota 9). Las restantes fechas de aparición en los demás boletines eclesiásticos consultados fueron las siguientes, por orden cronológico:

-BOE de Valencia, 15 de junio de 1931, núm. 2125 (Suplemento), págs. 201-204.

-BOE de Larazona y Tudela, año 69, 15 de junio de 1931, núm. 685, págs. 429-433.

-BOE de Oviedo, año 67, 15 de junio de 1931, núm. 12, págs. 188-192.

-BOE de Vitoria, año 67, 15 de junio de 1931, núm. 14, págs. 373 y ss.

-BOE de Grijuela, año 50, 15 de junio de 1931, núm. 10, págs. 193-195.

-BOE de Vich, año 77, 15 de junio de 1931, núm. 14, págs. 120-129.

-BOE de Segovia, año 76, 15 de junio de 1931, núm. 11, págs. 229-232, (Es este el primer documento relativo a la República que aparece en este Boletín).

-BOE de Madrid-Alcala, año 46, 15 de junio de 1931, núm. 1537, págs. 221-223.

-BOE de Pamplona, año 70, 15 de junio de 1931, núm. 1712, págs. 260-262.

-BOE de Orense, año 98, 18 de junio de 1931, núm. 12, págs. 197-200.

-BOE de Palencia, año 81, 19 de junio de 1931, núm. 13, págs. 401-405.

Tras la publicación del Documento colectivo figura una nota del obispo de Palencia, fechada el 16 de junio, señalando:

"Llamamos la atención de Nuestros muy amados hijos, los católicos de la Diócesis, sobre el precedente documento -que hemos recibido el día de hoy-, en el que los Reverendos Metropolitanos expresan el sentir del

tuvo el presuroso esuerzo de los metropolitanos en su

Episcopado en las presentes circunstancias, tan críticas para el porvenir de la Religión y de la Patria.

«Adviertan la exquisita prudencia, serenidad, ponderación, celo apostólico y amor patrio con el que están escritas todas sus palabras, y el contraste que éstas ofrecen en los actuales momentos con tantas y tantas como se pronuncian y se escriben a impulso de indómitas pasiones. Paren atenta consideración en lo que una vez más se recuerda e inculca a los católicos españoles, a saber:

«12. El deber ciudadano de conciencia, de respetar y obedecer a las autoridades constituidas, y la obligación de cooperar al bien común y al mantenimiento del orden social».

«22. El deber estrictísimo -y actualísimo- de tomar *toda la parte activa que puedan*, según las leyes, en las elecciones que se avecinan para las Cortes Constituyentes.

«32. Asimismo el deber de unirse circunstancialmente para una acción común -*necesaria e indispensable*- en defensa de los intereses de la Religión y de la Patria, sea cual fuere el partido político a que pertenezcan.

«42. Que *es apremiante* en la actualidad el que los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, se unan de una manera seria y eficaz a fin de conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan *plena garantía* de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».

«...son tiempos los actuales en que se hace preciso recurrir al Corazón Sacratísimo de Jesús por medio de su Inmaculada Madre con *constantes y ferventísimas* oraciones, que recaben las gracias que tanto se necesitan en el actual momento histórico para la prosperidad espiritual y material de la Patria.

«Tengan muy presente los fieles diocesanos que únicamente de la defensa de sus propios derechos se trata, cuando se les habla de unirse para defender los derechos de la Iglesia, que no es sino decir los derechos de "la congregación de fieles cristianos" contrados a la vigilante solicitud de los Obispos.

«Por lo tanto, unanse todos para esta acción común, necesaria, indispensable, apremiante en la actualidad».

-BOE de Valladolid, año 56, 20 de junio de 1931, n.º 6, págs. 50-63. (Este documento figura en el mismo boletín en que se publica el de 3 de junio de 1931, uno a continuación del otro).

-BOE de Mallorca, año 71, 22 de junio de 1931, núm. 7, págs. 97-99.

-BOE de Avila, año 42, 23 de junio de 1931, núm. 7.

-BOE de Sevilla, año 74, 25 de junio de 1931, núm. 1183, págs. 219-221.

-BOE de Coria, año 66, 25 de junio de 1931, núm. 13.

-BOE de Barcelona, año 74, 27 de junio de 1931, núm. 12, págs. 393-395.

-BOE de Córdoba, año 74, 30 de junio de 1931, núm. 8, págs. 190-192.

-BOE de Huesca, año 80, 1 de julio de 1931, núm. 7, págs. 403-405 (viene fechado en "Toledo, a 10 de mayo").

-BOE de Málaga, año 64, 15 de julio de 1931, págs. 209-211.

reunion del día 9 y en la redacción de este documento.⁽⁹⁷⁾

La declaración del episcopado español, primer documento colectivo de la jerarquía en el periodo republicano y que con tan mal andadura veía la luz⁽⁹⁸⁾ era un texto breve y

-
- BOE de Mondoñedo, año 74, 20 de julio de 1931, núm. 14, págs. 120-121.
 - BOE de Urgel, año 76, 17 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 257-259.

Hemos de destacar, por último, que entre los boletines eclesíasticos consultados no aparece publicado en el del arzobispado de Burgos, (debido, sin duda, a que no llevaba la firma del arzobispo como en la nota 98 aclaramos) ni en el de Astorga.

(97) CUENCA TORIBIO apunta, precisamente, como una de las causas de la poca beligerancia del clero ante las elecciones, el corto tiempo que separó la publicación de la pastoral de la celebración de aquellas. (CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid, 1985, pag. 30). Como hemos visto, escasos prelados aludieron al tema de las elecciones con anterioridad a estas fechas, si bien, en casos, como el del propio SEGURA y, sobre todo el de GOMA, su referencia a ellas fue más dura y expresa que la de la declaración colectiva.

(98) Aparte de los grandes desfases habidos en su publicación, SEGURA sólo incluyó la firma de los asistentes a la conferencia o la de los que se habían adherido a sus acuerdos, y, así, no figuraría la del arzobispo de Burgos por su falta de contestación a la convocatoria del día 9, lo que parecía reflejar ante la opinión pública un escaso entendimiento entre la jerarquía y provocó el consiguiente disgusto del Dr. DE CASTRO, según este manifestó a VIDAL en carta de 14 de agosto (en la que llega a calificar de "insidiosa" la omisión de su nombre), y, según se deduce de la carta de IEDESCHINI a Vidal de 10 de julio, también, y con anterioridad, al propio nuncio, *Esglesia i Estat durant la segona...*, 1, págs. 119 y 216). En la nota introductoria a esta pastoral IRIBARREN señala, sin embargo, erróneamente, que el texto llevaba la firma "de los representantes de todas las provincias eclesíasticas" destacando la del obispo de Jaén por estar vacante la archidiócesis de Granada: IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del Episcopado español, 1870-1974*, Madrid, 1974, págs. 130-131.

objetivo"" mediante el que los metropolitanos, ahora como una única voz, querían iluminar la actuación de los católicos y hacerles conocer la opinión de la Iglesia acerca de la situación que el nuevo régimen le iba creando. Comenzaban los arzobispos justificando la razón de su intervención cerca de los fieles en el deber que el derecho canónico les imponía, sobre todo en lo que atañía a la conservación de "la pureza de la fe y de las costumbres en el clero y en el pueblo cristiano" y en lo referente a "que en las escuelas de los niños y los jóvenes se dé la instrucción y educación al tenor de los principios de la religión católica.""" A continuación puntualizaban que su interés, "apartados en absoluto del campo de las contiendas políticas de partido", no era otro que cuidar del bienestar espiritual de los fieles y de la defensa de los derechos de la Iglesia.

(99) En la carta que el cardenal VIDAL envió a TEGESCHINI el 15 de junio siguiente le indicaría que este documento fue obra de todos, pues los metropolitanos "cortamos, recortamos y limamos el redactado por el Sr. Cardenal Segura". En esta carta le indicaba también el interés del primado en que los arzobispos hicieran suya la pastoral del día 1 e insistía en el tema, ya comunicado a PACELLI, de los desfases nacidos en la publicación de la declaración, señalando que hasta el 13 de junio no había vuelto a tener noticias del primado, que en esa fecha le remitiría la circular num. IV y la copia del acta de la conferencia (de la que también VIDAL señala que "no refleja exactamente lo acordado", comentario que también haría en la carta que envió el 9 de julio al resto de los metropolitanos con motivo de la cuestión del presupuesto del clero). No obstante, ni en esta carta ni en la enviada a PACELLI el día 27, a que ya hemos hecho mención, indica claramente cuando recibió la copia de la declaración colectiva, aunque parece expresar, por sus alusiones a la "pérdida de oportunidad" de los documentos en las fechas en que fueron recibidos, que también la recibió en este mismo envío (*Església i Estat durant la segona...* I, págs. 73-75).

(100) Hay que recordar que en estas fechas ya se había publicado el decreto sobre enseñanza de la religión en los centros oficiales. Ver sobre este extremo el capítulo "La cuestión de la enseñanza".

Y, tras esta introducción pasaban los arzobispos -no sin antes recordar el deber de acatamiento a las autoridades constituidas ya proclamado individualmente por los distintos prelados, y que ahora ellos ratificaban "en la confianza de que las autoridades respetarán los derechos de la Iglesia y de los católicos en una nación en la que casi la totalidad de la población profesa la religión católica"-⁽¹⁰¹⁾ al objeto central de la carta que era marcar "el deber estrictísimo" de los católicos de tomar toda la parte activa posible en las próximas elecciones, elecciones ante las que, además, deberían unirse, aunque fuera circunstancialmente y fuera cual fuese el partido a que pertenecían, para que, mediante una acción común, ante "los gravísimos intereses de la Religión y de la Patria", consiguieran la elección para las Cortes constituyentes de "candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social."⁽¹⁰²⁾

Como cierre del documento, y a fin de efectuar un juicio sobre la actuación del Gobierno que sirviera tanto de llamada de atención para este como para clarificar la actitud de la jerarquía ante los mismos fieles, justificaban los metropolitanos el silencio mantenido (ya hemos visto las claras y concretas excepciones) por "la esperanza de que serían íntegramente respetados los derechos de que por tantos títulos venía gozando la Iglesia en España"; al entender ahora que tal silencio podía ser interpretado como aquiescencia "a medidas del poder público y a hechos gravísimos que han producido penosísima impresión a los ca-

(101) Como se observa, esta frase es casi transcripción literal de las instrucciones recibidas del Vaticano.

(102) Id., id.

tolicos por lesionar derechos suyos preciadosísimos", pasaban a denunciar tales medidas y hechos, anunciando que dirigirían una exposición al presidente del gobierno provisional, no sin señalar que abrigaban todavía "la esperanza de que el Gobierno, conforme a los propósitos que tantas veces ha manifestado, de paz y de concordia, nada intentará ni permitirá respecto a la Iglesia y a sus derechos sin ponerse de acuerdo con la Santa Sede".¹¹⁰³

(103) 9 de mayo de 1931, "Declaración colectiva del episcopado Español", BDE de Toledo, año 87, 16 de mayo de 1931, num. 10, págs. 153-155. Curiosamente, y a pesar de la extemporánea prioridad que la publicación de la declaración en el boletín toledano supuso, señala Jesús IRIBARREN que este documento "nunca llegó a publicarse en el Boletín de Toledo", remitiendo al texto del Boletín de Tarragona del 30 de junio. Ver: IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del episcopado español, 1670-1974*, Madrid, 1974, pag. 36. Ver el apéndice num. 10,

4. La exposición al presidente del gobierno provisional y la restante actuación del cardenal Segura.

Si graves fueron las anomalías de la publicación del documento de 9 de mayo, mayor impacto causaría, tanto en el gobierno como en la jerarquía, otra actuación procedente del cardenal SEGURA.

Tal como se reflejó en el punto IV del acta de la conferencia de metropolitanos, y como ellos mismos comunicaron a los fieles en la declaración colectiva, se había acordado en ella elevar al presidente del Gobierno provisional una exposición protestando por la violación, ya efectuada o anunciada, de diversos derechos de la Iglesia.⁽¹⁰⁴⁾

(104) En la precitada carta de VIDAL a TEDESCHINI también se refirió aquel a este texto, aludiendo a que se había convenido que la protesta fuera "comedida y prudente" y que de la relación de las violaciones de los derechos de la Iglesia, que se enumeraron, "se suprimieron algunas que se había proyectado incluir". A ello añadía el arzobispo de Tarragona, a diferencia de lo que consta en el acta, que el texto de esta carta no se leyó, "encargándose de redactarla y enviarla al Sr. Cardenal Segura". (*Iglesia i Estat durant la segona...* 1, págs. 72-75). La apostilla que CUENCA TORIBIO hace a CASTELL sobre este asunto no es del todo exacta, pues aquel autor confunde este documento con el de 9 de mayo; la exposición de protesta fue, como CASTELL señala, fechada en Roma el 3 de junio, si bien indica erróneamente que los metropolitanos se habían reunido en Roma. (Ver CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea, 1833-1985*, Madrid 1985, pág. 30, nota 15 y CASTELL, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea*, Madrid, 1973, pág. 367).

Como VIDAL señalara a FEDESCHINI por carta del 18 de junio, esta exposicion "no debia darse a la publicidad". SEGURA, no obstante, así lo hizo sin consulta previa con los demás metropolitanos y, para mayor confusion, la publico fechada en Roma a primeros de junio. Lo que, como el de Iarragona señalaba, hacia probable que se atribuyera "a deseos o ingerencias de la Santa Sede". A la que convenia dejar siempre a salvo.¹⁰⁵

No cabe duda que la aislada aparicion de este documento en el boletin eclesiastico de Toledo, la extemporanea publicacion del anterior y lo que el gobierno entendio como sigiloso regreso del primado a España, fueron gotas que colmaron la contraria opinion que sobre la actuacion del cardenal tenian las autoridades republicanas y, así, como VIDAL graticamente expresaba en la mencionada carta, se presentó "el conflicto que se prevenia".

La exposicion al presidente del Gobierno provisional fue publicada en el boletin toledano el dia 5 de junio y en ella se reseñaban, sin prioridad ni matizacion alguna, lo que pudieran calificarse de graves y leves lesiones de los derechos eclesiasticos:

"Excmo. Sr:

«1. Reunidos los metropolitanos españoles para estudiar detenidamente la situacion creada a la Iglesia española por el nuevo estado de cosas, con el fin de trazar a los fieles normas seguras de su actuacion cristiana en los actuales momentos, acordaron dirigir atento escrito a Vuecencia, en

(105) *Iglesia y Estat durante la segunda...* I, págs. 78-79. A pesar de que en este periodo las observaciones que el cardenal hacia tanto al nuncio como al Secretario de Estado Vaticano eran muy similares, VIDAL no comentó a este, en su carta de 27 de junio ya citada, la conveniencia de no dar a la publicidad este documento y, menos, en la forma en que se hizo, quizá porque, pese a su apostilla, le quedara la duda de la aquiescencia de Roma a la actuacion de SEGURA.

tercio de presidente del Gobierno provisional, segun lo han venido haciendo con anterioridad en sus reuniones habituales.

22. hacen constar en primer termino que, reiterando las manifestaciones hechas por todos los reverendísimos prelados, han recordado a los católicos españoles el respeto y la obediencia que deben a las autoridades constituidas, y la cooperación en todo aquello que concierna al bien común y a la paz social, en la convicción de que las autoridades respetarán los derechos de la Iglesia y de los católicos en esta nación en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos profesan la religión católica.

vi. Mas se han visto en la precision de cumplir al mismo tiempo con el angustioso deber, que les impone su cargo pastoral, de manifestar la penosísima impresion que les han producido ciertas disposiciones gubernativas emanadas del poder publico, o la realizacion de hechos incalificables que violan de un modo manifiesto derechos sacramentales de los que viene rotando de tiempo inmemorial la Iglesia en España.

24. Pudieran citarse otros casos, mas bastara concretar los siguientes:

- Supresion de la obligatoriedad de la misa para el Ejército y en las cárceles.
- Anuncio oficial para fecha próxima de la secularizacion de los cementerios y de la separacion de la Iglesia y el Estado.
- Prohibicion a los gobernadores de provincias de tomar parte con caracter oficial en actos religiosos.
- Prohibicion al Ejército de que se manden las acostumbradas comisiones para actos religiosos.
- Supresion de las cuatro Ordenes Militares.
- Privacion de derechos civiles a la Confederacion Nacional Catolico-Agraria, precisamente por ser católica.
- Privacion del derecho de la Iglesia a intervenir en el Consejo de Instruccion Publica por medio de uno de sus prelados.
- Supresion de honores militares al Santísimo Sacramento a su paso por las calles, segun uso y ley tradicional de la España católica.
- La supresion de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias y en las superiores.

- Prohibición del crucifijo y emblemas religiosos en las escuelas en que haya quienes se nieguen a recibir las enseñanzas de la Iglesia.
- La libertad de cultos, que vulnera leyes fundamentales del Estado y artículos sustanciales del Concordato.
- La disposición sobre el tesoro artístico, que lesiona derechos inviolables de la Iglesia sobre sus propios bienes.
- La intracción de la inmunidad personal eclesíastica, reconocida expresamente en leyes vigentes.

«b. A la mas energica protesta de todos los buenos españoles, suscitada por los incendios de iglesias, conventos y palacios episcopales, se une, en nombre de todo el Episcopado, la de los metropolitanos, que lamentan vivisimamente, no solo los incalculables daños ocasionados, cuya legitima reparación reclaman, sino principalmente los sacrilegios y profanaciones con este motivo perpetrados.

«c. Al recurrir a Vucencia denunciando estos hechos y llamados en las promesas, repetidas veces hechas, de que en el nuevo régimen se respetarian las prerrogativas todas de la Iglesia catolica, esperan interpondra su autoridad cerca del gobierno provisional para que queden sin efecto los decretos enumerados, y para que en cuantas cosas se relacionen con derechos de la Iglesia en España se obre de acuerdo con la Santa Sede. Dios guarde a V. E. muchos años.

Roma, a 3 de junio de 1931. "1931"

(106) BOE de Toledo, año 87, 8 de junio de 1931, núm. 11, págs. 161-163.
(Reproducido por IRIBARREN, JESUS, *Documentos colectivos del Episcopado español, 1879-1974*, Madrid, 1974, págs. 133-135).

La publicación que de este documento efectuaron los restantes boletines eclesíásticos consultados fue, por orden cronológico, la siguiente:

- BOE de Palencia, 19 de junio, núm. 13, págs. 406-408.
- BOE de Valladolid, año 56, 20 de junio de 1931, núm. 6, págs. 63-67 (incluido en el mismo boletín que el de 9 de mayo).
- BOE de Mallorca, año 71, 22 de junio de 1931, núm. 7, págs. 100-101.
- BOE de Avila, año 42, 23 de junio de 1931, núm. 7, págs. 251-253.
- BOE de Coria, año 66, 25 de junio de 1931, núm. 13.
- BOE de Barcelona, año 74, 27 de junio de 1931, núm. 12, págs. 396-398.
- BOE de Orense, año 98, 27 de junio de 1931, núm. 214.
- BOE de León, 30 de junio de 1931, núm. 11, págs. 282-285.

El protagonismo asumido por SEGURA y su impulsiva forma de actuar no dejan de contrastar con el contenido de la circular (la num. IV, "Reservada y enteramente confidencial") que, en union del acta de la conferencia de metropolitanos y, al parecer, de la declaracion colectiva, remitió al resto de los purpurados con fecha de 10 de junio, es decir, un día antes de su regreso a España y cuando ya el boletín toledano había dado publicidad a la exposicion dirigida al presidente del gobierno. En esta circular, redactada tras los hechos consumados, trasladaba el primado las directrices recibidas de Roma, sin quizá percatarse de que las mismas incidían sobre la actitud que hasta el momento el mismo había mantenido e implicaban una corrección de la misma; de esta forma, tras aludir a su

-
- BOE de Burgos, año 74, 30 de junio de 1931, num. 12, págs. 321-324.
 - BOE de Córdoba, año 74, 30 de junio de 1931, num. 8, págs. 192-194.
 - BOE de Segovia, año 76, 30 de junio de 1931, num. 12, págs. 247-249.
 - BOE de Zaragoza, año 70, 1 de julio de 1931, num. 13, págs. 237-241.
 - BOE de Astorga, año 79, 1 de julio de 1931, num. 13, págs. 210-212.
 - BOE de Victoria, año 67, 1 de julio de 1931, num. 15, pag. 430.
 - BOE de Oviedo, año 67, 1 de julio de 1931, num. 13, págs. 196-200.
 - BOE de Muesca, año 80, 1 de julio de 1931, num. 7, págs. 405-407.
Entre este documento y la pastoral de Segura, de 1 de mayo de 1931 -censurada en esta publicación, como hemos indicado- publica este boletín eclesástico págs. 403-405 la "Declaración colectiva de los metropolitanos" de 9 de mayo de 1931, haciendo, pues, con la protesta del cardenal Segura de 15 de junio de 1931, que también publica, un "corpus documental" significativo.
 - BOE de Mondoñedo, año 74, 1 de julio de 1931, num. 13, págs. 112-113.
Indica que esta tomada del boletín eclesástico de Toledo.
 - BOE de Calahorra, año 72, 1 de julio de 1931, num. 10, págs. 219-218.
 - BOE de Vich, año 77, 15 de julio de 1931, num. 2072, págs. 365-366.
 - BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de julio de 1931, num. 687, págs. 533-536.
 - BOE de Málaga, año 64, 15 de julio de 1931, págs. 211-214.
 - BOE de Gerona, año 75, 22 de julio de 1931, num. 10, págs. 329-331.
 - BOE de Granada, año 86, 31 de julio de 1931, num. 348, págs. 666-670.
 - BOE de Sevilla, año 74, 3 de agosto de 1931, num. 1185, págs. 254-256.

Resalta, por último, la tardanza del boletín eclesástico de Tarragona:

- BOE de Tarragona, año 42, 17 de agosto de 1931, num. 16, págs. 321-323.

obligada ausencia como causa del retraso de su carta, transcribirá las directrices vaticanas. La primera de las cuales proclamará la necesidad de "unidad de acción" de todo el episcopado, singularmente a nivel de documentos relevantes:

"Ahora más que nunca es indispensable la unidad de acción del Episcopado, que logrará a su vez la unidad de acción de los fieles. Medio indispensable para esta unión de acción serán las orientaciones que se reciban, según los tiempos lo reclamen, y que habrán de transmitirse por conducto enteramente seguro y, habrán de guardarse con la más absoluta reserva.

Cuando sea preciso dirigir algún documento dedicado a los fieles, que diga relación principalmente con normas de acción externa, reclamaciones, protestas, etc., será indispensable la uniformidad, y tal vez sería preferible hacerlo en forma colectiva."

La circular transmitía a continuación el deseo de la Santa Sede de que los prelados diferenciaron claramente entre la "acción pastoral", competencia individual de cada obispo en su diócesis (o conjunta si había de afectar a toda la nación), de la "acción diplomática" que había de incumbir solo al nuncio.

Por último, y una vez había aludido a ciertas facultades especiales obtenidas de Roma "para atender al régimen pastoral de hoy y prevenir la situación en que puede encontrarse la Iglesia española mañana" y que oportunamente serían comunicadas, no quería el primado dejar de curarse en salud ante sus hermanos en el episcopado y, así, pasaba tanto a justificar sus acciones como a aludir a la aproba-

cien vaticana de los documentos publicados:

"Circunstancias de todas conocidas impidieron la publicacion de dos documentos colectivos, que se habran hecho ya publicos cuando Vucencia reciba esta carta. Ambos han sido juzgados favorablemente y reputados necesarios; por no haber facilidades para hacer la consulta individual antes de su publicacion, no llevan la firma de todos los Hermanos, como hubiera sido de desear.

"Segun en la declaracion colectiva se manifiesta, seria conveniente urgir en cada diocesis las instrucciones de dicha declaracion colectiva en los momentos presentes, para que nos quede la tranquilidad de haber hecho cuanto humanamente sea posible."""

(167) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 67-68. Respecto al interes del privado en que en cada diocesis se urgieran las instrucciones de la declaracion, ya hemos aludido a la imposibilidad de llevar a la practica este deseo en muchas de ellas.

En la comentada carta de VIDAL a TEDESCHINI de 15 de junio le enviaba copia de esta circular, de la recibida con el num. 11 por la que SEGURA trasladaba las ultimas instrucciones del Vaticano, no privandose de continuar con las observaciones sobre SEGURA que toda la carta contenia, asi, citiendose ahora a las comunicaciones personales del privado querra resaltar ante el nuncio "el tono y forma" de las mismas como dato clarificador -cosa que, segun dice, tanto el mismo TEDESCHINI como otros prelados ya habia observado- de su "tendencia a actuar como un representante de la Santa Sede, con celo, actividad y recta intencion", pero sin la vez hacerse cargo del terreno que pisa, de la situacion en que se halla, y de su temperamento y caracter", tendencia criticada por VIDAL a la que, al parecer, y como hemos apuntado, el mismo Vaticano querra poner coto segun las instrucciones que el mismo SEGURA trasladaba. Frente a ello, e incluso divirgiendo de estas instrucciones al considerar que "si bien hay que distinguir entre la accion diplomática y la pastoral, es muy conveniente que vayan acordes y no se estorben, sino que se complementen y ayuden para el bien de la iglesia", VIDAL proponia, en coincidencia -segun manifestaba- con el mismo nuncio y otros prelados, que la actuacion se realizara siempre por medio de conferencias de todos los obispos de las provincias eclesiasticas con sus respectivos metropolitanos y, para toda la nacion, de estos entre si, o mediante correspondencia o entrevistas "en vez de que un solo Arzobispo o Cardenal se dirija directamente

Revelador de la especie de pugna que, en punto a protagonismo, existía entre dos de los máximos príncipes de la Iglesia española, es el hecho de que al día siguiente de recibir la circular de SEGURA y pese a la unidad de acción del episcopado y a la gestión diplomática del nuncio que en ella se establecía, como instrucciones emanadas de la Santa Sede, y en fecha anterior a realizar sus personales observaciones a TEDESCHINI insistiendo en la acción conjunta de los metropolitanos,¹⁰⁶ decidiera VIDAL elevar, por su parte y sin consulta previa al resto de los arzobispos ni al

a todos los Obispos para trazarles las normas, que se dan a entender vienen del Romano Pontífice". Las ventajas que el cardenal veía de esta actuación, eran evidentes y apuntaban especialmente a dejar a salvo la situación de la Santa Sede:

"a) hay más garantía para la Iglesia, pues a lo menos en cosa urgente se oye el parecer de otras personas, y de sesenta en las no urgentes; b) hay más espontaneidad, y los Arzobispos asumen toda la responsabilidad de los acuerdos, siendo más difícil atribuirlos a la Santa Sede y colocarla en situación comprometida con el Gobierno; c) es más adecuado a la organización administrativa, judicial y jerárquica de la Iglesia dentro de cada Nación o Estado; d) se adapta más a las tendencias de hoy día, favorables a una prudente descentralización o autonomía; e) responde más a la realidad, pues las necesidades y condiciones de las Provincias Eclesiásticas pueden ser, y son de hecho, diferentes y aun a veces encontradas; f) facilita más la posibilidad de emplear la comunicación verbal entre los Obispos, lo cual evita documentos y escritos que pueden comprometer a la Santa Sede y aun a los Prelados ante el poder civil." (Op. cit., págs. 75-76).

En la carta de contestación de TEDESCHINI de 10 de julio se hacía este eco de las ideas de VIDAL expresándole que también otros miembros del episcopado le habían hecho observaciones respecto a la tendencia de SEGURA de transformar la primacía de honor -en el supuesto de que correspondiera a su sede (con lo que hacía una alusión a la pugna existente sobre este extremo entre Toledo y Tarragona)- en primacía de jurisdicción, tendiendo a actuar como un representante de la Santa Sede (op. cit., págs. 115-121). Sobre la cuestión de la primacía de las sedes arzobispales y la defensa de la actuación colegiada ver: Ibídem nota 7 y MUNTANYOLA, Ramón Vidal i Barraquer, *El cardenal de la paz*, Barcelona, 1971, págs. 266-270.

¹⁰⁶ Ver sobre este extremo la nota anterior.

propio nuncio, su propia exposicion al presidente del gobierno, sin duda con animo de contrarrestar, con su habil diplomacia, la protesta que habia aparecido en el boletin de Toledo seis dias antes. Esta exposicion venia motivada, ademas, por la respuesta que ALCALA ZAMORA habia dado el dia 28 al telegrama que, nada mas publicarse el decreto sobre libertad de creencias y cultos, le habia cursado el cardenal VIDAL protestando por la promulgacion de esta norma y por la de las restantes disposiciones dictadas a lo largo del mes de mayo tendentes a la laicizacion del Estado, que herian los sentimientos de los catolicos y ofendian a la Iglesia al infringir el concordato existente entre esta y el Estado español; en su carta de contestacion del dia 28 siguiente el presidente del gobierno provisional le habia manifestado su distinto punto de vista justificando la aparicion de estas disposiciones, por lo que el cardenal decidio exponerle detalladamente su disconformidad con concretas actuaciones del gobierno. Realizaba asi el arzobispo de Tarragona el 14 de junio su propia relacion de los agravios inferidos a la Iglesia, pero envolviendo sus frases en un deseo de concordia y colaboracion radicalmente distinto al oficial, desordenado y aspero utilizado por SEGURA.¹⁰²²

(102) Basta reseñar como muestra de esta iniciativa del arzobispo de Tarragona el parrafo relativo a los decretos secularizadores hasta entonces dictados por el Gobierno:

"Por qué, sin esperar la reunion de las Constituyentes, se dictan decretos que, aun cuando pudieran ser un anticipo de los acuerdos de la Asamblea, no tienen su fuerza, y constituyen, salvando siempre las intenciones, un ataque a las leyes concordadas y al solemne pacto entre las dos potestades? He hago cargo de la situacion del Gobierno, de su composicion, de lo que es y de lo que significa, y aun de la buena intencion que le guía, pero ello siempre se apreciara como una ofensa, aun con guante blanco, que se infiere a la Iglesia, a la cual amamos entrañablemente y debemos defender como los hijos saben defender a sus cariñosas madres".

El esfuerzo de VIDAL por retomar la actitud de concordia que hasta las reiteradas acciones del primado habian mantenido Iglesia y gobierno, no tuvo, sin embargo, fruto alguno. Masivo, claro es, la deferencia que este siempre mostro por la buena disposicion del de Iarragona; y, asi, tal como escuetamente relato a PACHELLI en su extensa carta del dia 27: "A los pocos dias regresa a España el Sr. Cardenal Segura, y el Gobierno, con mal acuerdo, le hace detener y acompañar a la frontera francesa..."

El primado habia regresado, en efecto, el dia 11 de junio por el paso de Roncesvalles, en forma "excesivamente discreta", segun el gobierno, que no esperaba este retorno, en forma abierta y sin ocultaciones segun la prensa catolica. Desde Irun se encamino directamente a Madrid. El gobierno, que habia constatado el regreso, ignoraba sin embargo, el paradero de SEGURA hasta que una llamada telefonica efectuada por este al convento de las adoratrices de Guadalajara para convocar una reunion del clero de la ciudad, le permitio conocer sus movimientos. El dia 14 de

A continuacion de esta queja insistia el cardenal expresamente en el decreto sobre la ensenanza del catecismo y en las manifestaciones efectuadas por el gabinete sobre el matrimonio civil y respecto a disposiciones sobre propiedades de la Iglesia, amen de otras cuestiones que seria prolijo reseñar aqui. (Op. cit., pags. 62; 65-66 y 70-72). La iniciativa de VIDAL, complice, no obstante, al nuncio que incluso le habia llegado a pedir que el mismo remitiera con los metropolitanos -al estar ausente el primado- la exposicion de agravios que en la conferencia se habia acordado elevar a SEGURA (op. cit., pags. 119-121). El mismo nuncio, por su parte, habia visitado el 29 de mayo a ALCALA ZAMORA para presentarle una "pequeña nota, muy moderada, sobre los últimos decretos, especialmente sobre los de libertad de cultos, ensenanza religiosa y patrimonio artistico", ("El Debate", 30 de mayo de 1931). De la reaccion de la jerarquia ante todas estas disposiciones trataremos ampliamente en el lugar oportuno.

junio, fecha en que se desplazó a aquella capital, su viaje fue interrumpido por la Guardia Civil, que le detuvo, según la orden cursada por el ministro de la Gobernación, Miguel MAURA, conduciéndole al Gobierno Civil de Guadalajara.

Basaba el gabinete su actuación, según la nota que, en su nombre, entregó a la prensa el ministro de la Gobernación, en el hecho de que a partir de la publicación de la pastoral de 1 de mayo, la permanencia de SEGURA en España había pasado a ser "peligrosa", por lo que había solicitado al Vaticano su remoción. Tras ello -según indicando la nota- el cardenal había abandonado "de modo espontáneo" el territorio español, marchando a Roma y regresando seguidamente "sin ponerlo previamente en conocimiento de ninguna autoridad civil ni eclesiástica" y permaneciendo oculto durante tres días. El gobierno, entre tanto, esperaba la contestación de la Santa Sede para proceder en consecuencia,⁽¹¹⁰⁾ hasta que tuvo noticia de que el cardenal "saliendo, al fin, del incognito, había convocado en Guadalajara una reunión de Parrocos y otras dignidades eclesíasticas"⁽¹¹¹⁾ por lo que "no vaciló en rogarle que abandonara de nuevo España...".

(110) Según relata ARBELLOA "Horas antes de que [Segura] volviera, por sorpresa, a España, el ministro de Asuntos Exteriores -entonces, de Estado- Alejandro Lerroux, había enviado una nota diplomática al Vaticano, pidiendo en nombre del gobierno español que no volviera el cardenal"; destaca el autor como la expulsión del primado fue obra personal de Maura, que "tuvo que aguantar las iras del presidente del gobierno" pero que éste, en piezo, aprobaría la decisión del ministro. ARBELLOA, Víctor Manuel, op. cit., pág. 22.

(111) Según la versión del arzobispo de Guadalajara, recogida por el boletín de Toledo, quienes esperaban a SEGURA eran siete de los parrocos, más catorce sacerdotes seculares de la ciudad, (BOE de Toledo, año 87, 25 de junio de 1931, núm. 12).

A ello añadía la nota que la resistencia puesta en un principio por el primado dificultó el cumplimiento de la orden del gobierno y que en tanto no recibiera este la contestación de Roma, no quería que se perturbara "la paz espiritual del país con la actuación personal en el de quien viene dando muestras reiteradas y públicas de hostilidad al régimen..."; con su actuación añadía, por fin la nota, tras insistir en el sigiloso regreso del cardenal y entrando en un terreno que indudablemente excedía con mucho de sus competencias- el gobierno "está seguro de haber prestado un servicio a la paz pública, y otro no menor a los altos intereses espirituales de la Iglesia". ""

En respuesta inmediata a esta nota el obispo auxiliar de Toledo y vicario general del arzobispado Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO envió al presidente del gobierno provisional una extensa carta de protesta por la actuación seguida contra el cardenal y en defensa de la rectitud del proceder de éste. En esta carta se explicaban los hitos de los sucesos y se reprochaba al gobierno tanto la vaguedad de su nota como su falta de pruebas contra el cardenal y el no haber aguardado la contestación de la petición cursada a la Santa Sede. ""

(112) Hemos tomado el texto de esta nota de la reproducción efectuada por el boletín de Toledo (año 87, 25 de junio de 1931, núm. 12, págs. 185-186) y pasamos a reproducirla íntegra en el apéndice núm. 11.

(113) 17 de junio de 1931, BDE de Toledo, cit., págs. 189-191. Ver apéndice núm. 12. El sustituto que al resumen de esta carta dio "El Sol" no deja de ser tendencioso, ya que tras señalar: "El obispo auxiliar de Toledo dirige un documento al jefe del Gobierno", agrega: "Pide el regreso del cardenal Segura y reconoce que el primado, aunque no quebrantó órdenes del Gobierno, no obró con discreción" lo cual -y en el propio resumen volvía a hacerlo- era una tergiversación de las palabras del Dr. ROCHA PIZARRO que literalmente decía: "No regresó, por tanto, en 'forma excesivamente discreta' y, en todo caso, si en la discreción pudiera haber exceso, justificado estaba, no por desconfianza en la rectitud del gobierno, sino por violentas campañas..."; frente a ello el citado periódico indicaba que el obispo decía que "no regresó en forma discreta, aunque la falta de discreción estaba justificada, no por desconfianza de la actitud del Gobierno, sino por las violentas campañas..." ("El Sol", 21 de junio de 1931).

excede, sin embargo, al interés de esta carta la redactada por el propio SEGURA, y también destinada a ALCALÁ ZAMORA, en la que el cardenal, comenzando por transcribir la laconica orden de expulsión cursada por el Gobierno civil de Guadalajara, según su propia petición, inquiría al gobierno por las razones de la misma y defendía su derecho a permanecer en España, añadiendo que solo por la fuerza abandonarían su diócesis, extremos que pedía que le fuera permitido hacer constar, en su caso, mediante acta notarial. A ello añadía un relato pormenorizado de su detención y de las circunstancias que habían rodeado las horas siguientes a la misma. ¹¹⁴²

(1142) 15 de junio de 1931, BDE de Toledo, cit. págs. 181-183. Ver apéndice núm. 13. Tras la redacción de esta carta fue conducido el cardenal a la frontera francesa. BDE cit. págs. 177-181. También el boletín de la diócesis de Astorga, reprodujo esta carta (año 79), 1 de julio de 1931, núm. 13, págs. 212-216) y, más adelante, la contestación de Alcalá Zamora (15 de julio de 1931, núm. 14, págs. 224-226); el de la diócesis de Huesca reprodujo la carta del primado añadiendo, a continuación: "Nuestra protesta: Al mismo tiempo que expresamos nuestra más enérgica protesta por los vandálicos incendios de iglesias y conventos, protestamos por la injustificada expatriación del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado, depuesta por el Gobierno provisional" (BDE de Huesca, año 80, 1 de julio de 1931, núm. 7, págs. 408-411). El boletín de Palencia, que había publicado la noticia de la primera partida de Segura calificándola como "exodo", pidiendo a los católicos que rezaran por el (BDE de Palencia, año 81, 1 de junio de 1931, núm. 11, págs. 366-367) publicaría ahora la carta de Segura, la contestación dada por Alcalá Zamora y la cursada a este por el Dr. Rocha Pizarro (BDE de 1 de julio de 1931, núm. 14, págs. 425 a 428). Estos dos últimos son, entre los consultados, los boletines eclesiales que más trataron de los acontecimientos relativos al primado. La versión que da TURÓN DE LARA de estos hechos no parece del todo exacta por cuanto, contrariamente a la reseña que da el BDE citado, indica que "al salir de España el cardenal había constar por acta notarial su enérgica protesta contra todas las disposiciones encaminadas a la separación de la Iglesia y el Estado, a la libertad de creencias y cultos cuyos principios de base establecía un Decreto del 22 de mayo", con lo que parece existir una confusión con la exposición de protesta del 3 de junio. TURÓN DE LARA, Manuel *La España del siglo XX*, Barcelona 1974, II, págs. 308-309.

La respuesta de ALCALA ZAMORA al primado, modelo de firmeza y respeto, fue inmediata y en ella le explicaba como no habia sido posible mantener con el "la relacion normal que, por fortuna, venimos sosteniendo con la casi totalidad del Episcopado español", aludia a la "hostilidad injustificada" del cardenal contra el nuevo gobierno y a las "adoranzas suprimidas y danosas respecto del regimen derruido por la voluntad nacional".

Tras ello le indicaba como con su espontaneo viaje el gobierno habia expuesto al nuncio el deseo de que su estancia fuera de Espana se prolongara, dada "la dificil situacion que su pastoral habia creado", y por adecuarse su alejamiento a la peticion formulada ante la Santa Sede, amen de que asi lo aconsejaba "la inquietud del espiritu publico, lamentablemente perturbado". Ante tal situacion, el gobierno no esperaba el regreso del primado "y menos aun podiamos calcularlo -añadia-, dejando entrever el impacto que para el gabinete habia supuesto el envio de la exposicion de protesta precisamente desde Roma, como VIDAL habia observado a FEDERICHINI- a los pocos dias de habernos dirigido V.E., rechazandola en Roma, su protesta contra distintas determinaciones del Poder publico".

ALCALA ZAMORA se explayaba seguidamente en comentar el contenido de la exposicion de SEGURA y, asi, apuntaba como algunos de los motivos de la protesta "eran conjetura o rumor", aunque con independencia de que todos ellos pertenecieran a la exclusiva esfera del derecho politico y que otros -como el relativo a las ordenes militares- eran meras exterioridades honorificas" sin conexi6n con la espiritualidad religiosa, si bien no pretendia polemizar en las cuestiones planteadas por el primado, con lo que, pese a haber dejado zanjado que las cuestiones expuestas por SEGURA eran de la exclusiva competencia de la jurisdicci6n civil,

no entraba en el análisis de las que pudieran revestir, efectivamente, mayor gravedad. (115)

No dejaba de puntualizar el presidente como el documento era "posterior en cerca de un mes a la reunión de los Pres. Prelados Metropolitanos" insistiendo nuevamente en que sus acuerdos habían sido también comunicados "fechados en Roma". lo cual, decía, hacía suponer la permanencia de SEGURA en dicha ciudad, de ahí que su silencioso regreso fuera una inquietud para el gobierno, agravada por "las alarmas y protestas deplorablemente renovadas de la opinión".

Contestando ya directamente a las cuestiones planteadas por el primado en su carta desde Guadalajara, añadía el presidente:

"Pregunta V.E. si las determinaciones del Gobierno estarán fundadas en consideraciones de orden público o en ataque, por su parte, a las leyes de la Republica. Siempre con el debido respeto habré de contestarle que el peligro de aquel orden se vio patente desde la aludida Pastoral, y resurgió de nuevo con su presencia, a tal punto que esas inquietudes creo pesarían en su ánimo, después de escrita la comunicación, para dar asentimiento

(115) no deja de ser relevante que la postura de Angel Herrera coincidiera en muchos puntos con la de Alicia Zamora; en lo que respecta concretamente a la cuestión de las órdenes militares la opinión de ambas personalidades era casi exacta tal como el Cardenal Vidal exponía al nuncio el 9 de agosto:

"Jueves conferencia larga y reservada con D.A. Herrera, llamándose atención que persona tan ponderada me habíase espontáneamente última pastoral y carta dirigida al Pte. por Segura, que las consideraba inoportunos, no por doctrina, sino por tono y ocasión; sobre todo hizo hincapié en lo de la defensa de las órdenes militares que dice sólo sirven hoy para fomentar vanidad riases nobiliarias, sin reportar gran utilidad. En este modo de pensar abundan muchas personas y periódicos que se llaman, por información, a copiarlo, pero sin comentarios". *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 154-155.

voluntario a la indicacion atenta que, primero, juzgo no debia dir. En cuanto a las leyes de la Republica, la raiz y total asiento de su ericacia esta en el respeto a la institucion misma, y cuando esta se ataca, entonces sus preceptos quedan alcanzados con el quebranto o riesgo conseqüiente o proporcionado a la autoridad de quien expresa su discrepancia y su oposicion."

Como se ve en estas irases no ocultaba ALCALÁ ZAMORA la impresion del gabinete de que la actuacion seguida por el primado implicaba un verdadero ataque a la Republica.

Las consideraciones con las que el presidente finalizaba su carta no respondian, desde luego, a las impresiones transmitidas por el cardenal respecto a la actuacion seguida con el por la Guardia Civil y policia, puesto que abundaban en una deferencia a la que el purpurado no habia aludido, trataban -contra la queja del cardenal- de su buen estado de salud, y justificaban, ademas, la actuacion del gobernador civil de Guadalajara, que el primado si criticaba expresamente, acusandole de la escasa atencion mantenida por el, precisamente, con el de toledo.

La carta de ALCALÁ ZAMORA era, en consecuencia, una absoluta y logica defensa diplomatica de la actuacion seguida por el gobierno, incluso con la insinuacion del intento de garantizar la integridad fisica del cardenal, y claramente, una puntualizacion acusatoria de los desafortunados pasos y declaraciones de este.⁽¹¹⁶⁾

(116) 17 de junio de 1931, BDE de toledo, 25 de junio de 1931, num. 12, pags. 191-193. Esta carta de ALCALÁ ZAMORA se reprodujo tambien integra en la primera pagina de "El Sol" del dia 19 de junio. Ver el apendice num. 14.

El boletin eclesíastico del arzobispado del 25 de junio fue un numero especial que publico los mas significativos documentos sobre la detencion y destierro del cardenal SEGURA, tras la carta de ALCALÁ ZAMORA incluida, ademas, los comentarios que algunos periodicos, monarquicos o integristas, habian hecho a ella. Concretamente los realizados por "El Castellano", de toledo, "El Siglo

Futuro (Conocida es la relación del primado con el periódico integrista; a ella, en el rechazo de Arboleya por el cardenal alvud, GENAVIDES, *El fracaso social del catolicismo español*, Arboleya Martínez, Barcelona 1973, págs. 396-399 y 453-454) y "El Diario de Barcelona".

Ninguno de estos tres periódicos recogía la alusión del presidente a que los últimos documentos del primado venían fechados desde Roma; los tres coincidían, sin embargo, en señalar que el regreso de SEGURA, y la forma de efectuarse, no tenían por que intranquilizar al gobierno, ya que había vuelto a su domicilio habitual en Madrid sin ocultarse de nadie y con la oportuna licencia del papa, sin cuyo previo acuerdo el gobierno no podía impedir que un prelado dirigiera su diócesis.

Destacaba "El Castellano" -refiriéndose ahora a la nota oficial comunicada por el gobierno- como los argumentos dados en ella en pro de la Iglesia, no tenía nada que ver con la actuación real del gabinete, tal como el cardenal había enumerado en la carta que, en nombre de los metropolitanos, había dirigido al presidente, añadiendo respecto a la contestación de éste, y refiriéndose alquilamente al párrafo en que elvud entrara en discusión sobre las cuestiones planteadas, que "una respuesta evasiva sobre estos hechos no es una justificación".

Tanto "El Castellano" como "El Diario de Barcelona" se referirían especialmente a una de las causas alegadas por ALCALA ZAMORA para la expulsión de SEGURA: la alteración del orden público a raíz de su pastoral de i de mayo, que había sido nuevamente perturbado por su presencia, criticando el primero como para lograr la pacificación se utilizaba el sistema de "expulsar a la víctima", acusándolo de perturbador y sin censurar la campaña que contra él se había hecho, y añadiendo el segundo que no se había probado que la estancia del cardenal en España implicara realmente un peligro para la paz pública.

Los tres periódicos coincidían, obviamente, en señalar que en la famosa pastoral no se hostilizaba al régimen cuando, precisamente, aconsejaba a los católicos el respeto y la obediencia al mismo y en que no había en ella nada censurable y menos aún, un peligro para el orden; a este comentario añadía "El Siglo Futuro" una reseña hecha por "The Times" en la que, respecto al escrito de SEGURA, se señalaba que era "un documento cuidadosamente redactado y solidamente basado en las Encíclicas pontificias", sin que se hubiera probado nunca que el cardenal se hubiera presentado como "sostenedor de la consubstancialidad de la Iglesia y de la Monarquía".

"El Diario de Barcelona" añadía a todo ello que en la contestación de ALCALA ZAMORA al Primado no se formulaba ninguna acusación determinada y que el recuerdo de la pastoral era "de una imprecisión desconcertante", por cuanto de ella no podía citarse ni una sola frase que resultara tendenciosa en el sentido de desaleto al régimen actual y de deseo de retorno al régimen anterior, y que si acaso se consideraba que las líneas de "afectuoso recuerdo a la Majestad caída, por la religiosidad de que había dado pruebas en sus de una ocasión", tenían ese significado, que entonces se señalaría así como la justificación de la actuación ministerial.

Respondía "El Castellano", por último, a la referencia que hacía el presidente de la actuación del gobernador civil de Guadalajara en relación con la seguridad por el cardenal respecto al de Toledo, calificando, además, como "El Siglo Futuro", de "irónicos" los comentarios sobre la salud del primado y añadiendo este último periódico que era un "sarcasmo" el deseo de ALCALA ZAMORA de que SEGURA aceptara voluntariamente la expatriación, medida "decían ambos rotativos" que implicaba una sanción impuesta sin mediar la intervención de la Justicia.

Tras estos comentarios y bajo el título "Juicios de Prensa", incluía el boletín eclesiástico opiniones complementarias mantenidas por "La Época", "El Debate", "El Siglo Futuro", "El Castellano" de Toledo, "ABC", "El universo", "La Nación", "El Diario de Barcelona", "Diario de Valencia", "Correo de Andalucía", "Diario Regional", "Diario Montañés", "El Pueblo Vasco", de Bilbao, "El Noticiero", de Zaragoza, "El Pensamiento Navarro", "Adelante", de Bilbao, "La Independencia" de Almería, "El Eco de Cartagena", "La Verdad", de Murcia, "La Constancia", "Diario de Castellón", "La Gaceta del Norte", "El Correo Catalán", "La Publicitat", "El Pueblo Católico" de Jaén, "La Voz de la Verdad", de Lugo, "Diario de León", "El Castellano", de Burgos, "El Ideal Gallego", "El Correo", de Lérida, "Hogar y Pueblo" de Burgo de Osma, "La Lectura Dominical", "The Times" y "A Voz", de Lisboa. No se especificaban las fechas de aparición de estos comentarios y como encabezamiento de ellos señalaba lo siguiente:

"No es necesario advertir que para una parte de la Prensa, el Gobierno, al expulsar de España al Esmo. Cardenal Primado, no sólo ha cumplido con su deber, sino que ha obrado con excesiva blandura. Ésa es la libertad democrática que ellos defienden! Pero quienes no han retrocedido ante la calumnia reiterada y constante ni ante la excitación, no disimulada siquiera, al atentado personal, están en su papel reservándose el derecho de decir cuanto quieran y pidiendo la expulsión o la cárcel para los que no piensan como ellos.

Pero en honor de la verdad hemos de decir que frente a estos periódicos, que al fin son la excepción, otros muchos, de España y del extranjero, han condenado con palabras energicas la injustificada expulsión de nuestro Prelado.

A continuación publicamos algunos de estos artículos, lamentando no poder publicar otros muchos, que no han llegado a nuestras manos".

La reiterada queja que todos estos periódicos formulaban insistía en la arbitraria actuación del gobierno al no haber formulado acusación concreta alguna contra el cardenal, coincidiendo todos ellos en la exaltación de las virtudes de este al que calificaban de víctima inocente en la narración que hacían de los hechos e incluyendo comentarios alusivos a las fórmulas mas inteligentes o correctas que el gobierno podía haber utilizado y juicios sobre el significado del recuerdo a la monarquía incluido en la pastoral, no sin referirse también a la anómala situación de los obispos de Málaga y Vitoria. Así "La Época" señalaba cómo lo correcto era que el gobierno hubiera hablado previa y privadamente con Roma; "La Nación" que hubiera bastado con advertir al cardenal que se abstuviera de emitir juicios sobre cuestiones políticas y

"ABC" que la omisión por parte del gobierno de efectuar una reclamación directa a la Iglesia para que fuera esta la que decretara el alejamiento del purpurado hacia que este obrara desacorde con la autoridad suprema de aquella. Observación esta que, como se ha puesto de manifiesto, solo contenía una parte de la verdad por cuanto el gabinete si había efectuado tal reclamación si bien no había esperado, para actuar, la contestación a la misma.

El integrista "El Siglo Futuro", por su parte, destacaba que la referencia a la monarquía efectuada por SEGURA en la pastoral de 1 de mayo no tenía mas trascendencia que la de "un recuerdo histórico" y que el no rechazar el régimen que durante años había reinado en España no significaba no acatar al nuevo poder constituido; a no ser, decía "El Ideal Gallego", que solo se permitiera hablar de él para hacer su apología.

No dejaba de haber periódicos, por último, que, comentando la nota oficial, destacaban lo paradójico de la actuación seguida y, así, "El Universo" señalaba:

"Posible es que se atrevan a decir que el Sr. Cardenal representa la perturbación y el desorden, que los elementos extremistas le son terriblemente hostiles y que el extrañamiento tiene carácter de medida protectora de la vida del venerable purpurado. Mas si se dijese eso, se diría algo que no honraria al Gobierno..."

A ello añadía "El Diario de Barcelona":

"¿Dónde está, pues, la delincuencia del peligroso Cardenal, capaz de alterar la paz pública y tan olvidado de su misión que el Gobierno se ve obligado a expulsarle en defensa de los propios 'intereses espirituales' de la Iglesia, según se dice donosamente en esa Nota ministerial de última hora...". Estábamos lamentando las desconsideraciones ministeriales para con el catolicismo y ahora resulta que el Gobierno está velando celosamente por los intereses espirituales de la Iglesia velados precisamente por el señor Cardenal arzobispo de Toledo, nada menos".

Finalmente el boletín no se privaba, como refuerzo a todos estos comentarios de la prensa nacional, de publicar el comentario que el conservador "The Times" había hecho sobre la pastoral de Segura y al que ya hemos aludido al tratar del juicio de "El Siglo Futuro" sobre la carta de ALCALA ZAMORA al primado comentario que incluso, desde luego, una dura crítica sobre la actuación del gobierno, señalando como ante el extranjero el cardenal podía aparecer "como testimonio de la intolerancia española", (Ibídem, págs. 197-217).

5. Las protestas contra la expulsión del primado.

Irás recoger los distintos artículos de prensa alusivos a la detención y expulsión del cardenal SEGURA, el número especial del boletín eclesiástico del arzobispado publicado a causa de tal hecho, se refería a la inicial intención de publicar las adhesiones y protestas recibidas, de la que, según señalaba, había tenido que desistirse por su cuantía. Añadía, no obstante, que tras la protesta del papa por medio del nuncio¹¹¹⁷ y la del episcopado español, habían reprobado la actuación del gobierno las organizaciones nacionales de Acción católica¹¹¹⁸ y grandísimo número de Corporaciones eclesiásticas, de obras de acción católica, de organismos sociales, asociaciones piadosas y personas particulares.¹¹¹⁹

(117) El texto de la protesta del nuncio no fue dado a la publicidad; a "la firme protesta" presentada por él en nombre de la Santa Sede, aludía TEDESCHINI en su carta al cardenal VIDAL de 10 de julio de 1931, *Església i Estat durant la segona...*, I, pag. 119.

(118) El primado era su director pontificio.

(119) BDE de Toledo, 25 de junio de 1931, núm. 12, págs. 217-219. Así lo corrobora, al menos, la publicación que hizo el boletín eclesiástico de Segovia del telegrama dirigido el 17 de junio al presidente del gobierno provisional por la acción católica segovina de la diócesis, así como de la "exposición de protesta" que la elevaban el día 20 "más de cinco mil mujeres" segovianas, aquel protestando por la expulsión del primado "que constituía 'atentado contra santa unidad Iglesia Católica, conculcación derechos reconocidos Concordato, injuria a la eminencia y virtudes notorias Purpurado Toledo y violación injustificada elementales derechos ciudadanía'- esta por los decretos antirreligiosos, quema de conventos e iglesias y expulsión de prebendados, por lo cual pedía:

"...la reintegración a sus Sedes del Emmentísimo Cardenal Primado de Toledo y de los dignísimos Obispos de Vitoria y Málaga, hoy extrañados de la nación e impedidos de cumplir sus sacrosantos deberes pastorales, ya que dichos Prelados trabajan, fuera de toda política, por la difusión y pureza de la Religión y Moral católicas, que han de mirarse como la mejor salvaguardia del Estado y escuela forjadora de ciudadanía; tanto más extraña parece esta medida tomada con los Prelados, cuanto que se toleran propagandas anarcho-sindicalistas, dañosas para la consolidación del actual régimen y del orden social".

La reacción de la jerarquía fue, en todo caso, inmediata; así, a los dos días de la expulsión del cardenal y con independencia de los comentarios que, mientras tal hecho se efectuaba, había hecho de la actuación de aquel en la carta dirigida a TEDESCHINI el día 15, enviaba VIDAL un dolorido escrito a ALCALA ZAMORA quejándose por la anómala actuación del gobierno al no esperar la respuesta de la Santa Sede a la solicitud cursada para que el primado no regresara a España o no haberlo tratado con ella, advirtiéndole de los peligros que la arbitraria medida implicaba y de la necesidad de buscar soluciones armónicas en las relaciones de la Iglesia y el Estado.⁽¹¹⁷⁾

Tal como señala BAILLOR y ARBELLOA⁽¹¹⁸⁾ no se encuentra en el archivo del cardenal VIDAL copia de la contestación del presidente; hay, sin embargo, por estas fechas (el día

(117 y 20 de junio de 1931, BOE de Segovia, año 36, 30 de junio de 1931, num. 12, págs. 250-252) (Ver también sobre esta "exposición de protesta", el epígrafe sobre los incendios de iglesias y conventos de este capítulo y el capítulo sobre la cuestión de la enseñanza).

También ARBELLOA, al aludir a las protestas del municipio y del cardenal de Tarragona, se refiere a la de "...otros muchos obispos, sacerdotes, asociaciones, fieles..." señalando, que lo hicieron privada y públicamente; este autor califica la expulsión del primado de "innecesaria e intemperante en vísperas de elecciones" y destaca como este hecho "exacerbó aun más a la mayoría de los católicos", llegando algunos a pensar en incluir al primado en la lista de los candidatos a las constituyentes, "sin llegar a tanto -continúa el autor citado-, el destierro del cardenal fue un estribillo constante en los mítines de la derecha y en los artículos de la prensa católica" (ARBELLOA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España, 1931*, Barcelona, 1976, págs. 22).

(120) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I., págs. 75-76.

(121) *Ibidem*, nota 10.

10 de junio) respuesta a la enviada por el arzobispo de Tarragona el día anterior a la expulsión del primado y en la que, como hemos visto, protestaba por todas las medidas secularizadoras proyectadas. No deja de ser revelador que en la carta de ALCALA ZAMORA no solo no se haga la más mínima mención de todas las cuestiones planteadas por VIDAL sino que, además, se silencie deliberadamente cualquier referencia a la detención y expulsión del primado, salvo una escueta irase en la que se quejaba de no ser la conducta del de Tarragona la norma general del proceder de otros prelados. El laconismo de la respuesta de ALCALA ZAMORA es harto elocuente de su deseo de no entrar en temas que debían resultarle especialmente dolorosos.¹²²

Otros prelados serían más directos y rotundos que el arzobispo de Tarragona y, a diferencia de la cautelosa prudencia que siempre acompañaba al actuar de aquel, quisieron que sus palabras fueran de público conocimiento, por lo que no duraron en insertarlas en sus boletines diocesanos. Tal haría el Dr. ÁLVAREZ MIRANDA, obispo de León, que el día anterior al escrito de VIDAL, elevaría una escueta y energética protesta al presidente del gobierno provisional. En ella se quejaba del destierro tanto de SEGURA como del obispo de Vitoria¹²³ señalando el agravante de la expulsión de aquel "por la forma en que se ha hecho".

A ello añadía, en la misma línea que VIDAL había expuesto en su mencionada carta, como los obispos venían ayudando al gobierno "trabajando por el orden, la paz y tranquilidad, y la consolidación del régimen", tolerando en silencio "los decretos que ofenden nuestros más caros senti-

(122) Op. cit., págs. 77-78.

(123) A la expulsión del Dr. MUGICA nos referiremos más adelante.

mientos religiosos, y que parecen contraproducentes en estas circunstancias"; era además, para el prelado un gran contraste que frente a la proliferación de "discursos revolucionarios en el mas alto grado" y de "hojas subversivas que se distribuyen por todas partes", se desterrara "a Prelados dignísimos, que son honrados ciudadanos, y que solo se ocupan del santo ministerio" mientras que a los perturbadores y revolucionarios no se les atalara, dejándoles continuar "su obra perturbadora y antipatriótica". Finalizaba el Dr. ALVAREZ su escrito señalando que podía unir a su protesta la de todos sus diocesanos "a excepción de una insignificantisima minoria", pero que se abstenia de hacerlo "por no crear dificultades al gobierno", al que, no obstante todo lo anterior, no dejaba de desear "el mejor acuerdo"; por ultimo, y para acabar, pedía el pronto regreso de los dos prelates expulsados.¹²⁴

Aunque espero hasta el 20 de junio para enviar su queja al gobierno, el arzobispo de Burgos prefirió hacerlo por un contundente telegrama al presidente en el que, al igual que el obispo de León, no solo aludía a la expulsión de SEGUERA sino también a la de MUGICA así como a los decretos y demás medidas secularizadoras adoptadas o que se preveía adoptar, todo ello bajo reserva de acudir, en su caso, ante las Cor-

(124) 16 de junio de 1931, BOE de León, 15 de julio de 1931, núm. 12, pags. 322-324. Esta protesta fue también publicada en el BOE de Toledo, año 67, 23 de julio de 1931, núm. 11, pags. 250-257. Tras la publicación de León se insertaba una nota señalando que también se habían elevado al gobierno muchas protestas de la Diócesis, así, la del cabildo catedral, parroquias, asociaciones piadosas, etc., etc.

tes.***

La generalidad de la jerarquía no siguió, sin embargo, esta línea de dureza y publicidad del Dr. Manuel de CASTRO ALONSO, siendo mas probable que, al igual que VIDAL, remitieran su protesta al gobierno en forma reservada. Así se deduce de la resena publicada en el boletín eclesiástico de Coria indicando que el obispo de Madrid-Alcala "visitó el 17 del pasado junio al jefe del Gobierno provisional, para expresarle, como obispo más antiguo de la provincia eclesiástica que rige el Cardenal Segura, y en nombre de nuestro amadísimo señor Obispo y de los demás Rvdmos. Prelados de dicha provincia, la mas viva condolencia y a la vez la protesta más sentida y respetuosa, por la forma en que se llevo a cabo la detención y expulsión del Emmo. Sr. Cardenal".*** Igual hipótesis cabe establecer tambien a

(125) "Arzobispo Burgos, nombre propio y Sufragáneos Provincia Eclesiástica, vista nada convincente explicación vuerencia sobre salida inconsiderada Cardenal Priado y Hernando de Vitoria, violando sacratísimos derechos Iglesia, Religión y libertad, sin atender unánime protesta católicos españoles, mayoría inmensa Nación ante decretos libertad cultos, supresión catecismo, persecución ordenes Religiosas y amenazas mayores progresos Anticristo; protestan energicamente conducta contraria atianzamiento nuevo regimen, suplicando mediten gravísimos males a que exponen querida Patria; sin perjuicio acudir Cortes en momento oportuno (20 de junio de 1931, BUE de Burgos, año 74, 30 de junio de 1931, núm. 12, pag. 324). El arzobispo de Burgos que, como recordamos, no habia asistido a la conferencia de metropolitanos de 9 de mayo actuaba ahora, por tanto, sin conexión con el resto de los arzobispos, siendo el unico entre ellos que protestó por la expulsión de los prelados y por las medidas antirreligiosas -con independencia, claro es, de la propia exposición de SEGURA del 3 de junio- tan airada y publicamente. La inserción en el boletín eclesiástico de la archidiócesis de este telegrama hizo que inmediatamente tuviera amplia difusión, como lo corrobora su publicación en los boletines de León (30 de junio de 1931, núm. 11, pag. 285); Calahorra (año 72, 11 de julio de 1931, núm. 10, pag. 218); Vitoria (año 67, 15 de julio de 1931, núm. 16, pag. 452) y Toledo (año 87, 23 de julio de 1931, núm. 14, pag. 250).

(126) BUE de Coria, año 66, 15 de julio de 1931, núm. 14, pag. 222.

partir de la noticia del boletín diocesano de Palencia aludiendo al envío por parte del obispo de un telegrama de protesta, en su nombre y en el del clero diocesano, al presidente del gobierno, pero sin pasar a publicarlo; es, pues, muy lógico pensar que al igual que el Dr. PARRADO GARCÍA actuaron la mayoría de los prelados.'''

Así, del resto de las diócesis examinadas, y aparte de las aludidas publicaciones de León y Burgos, tan solo hemos encontrado la protesta elevada a ALCALA ZAMORA y hecha pública por el ultramontano obispo de Orense y la efectuada por el obispo administrador de Ibiza en su nombre y en el del clero y fieles de la diócesis, que sería reseñada por el boletín eclesiástico de Toledo.

El escrito del Dr. CERVINO GONZALEZ era, como no podía ser menos, una larga exposición llena de tópicos conservadores en la que aludía a la expatriación del primado y a la de los Dres. MUGICA y GONZALEZ, para pasar seguidamente a hacer su personal enumeración de los agravios inferidos a la Iglesia por la República, enumeración que indudablemente se inspiraba en la del cardenal SEGURA de 3 de junio, que venía inserta en el boletín diocesano precediendo a la carta del Dr. CERVINO.

(127) s.f., SOE de Palencia, año 86, 1 de julio de 1931, núm. 14, pág. 143. En este mismo boletín, en el apartado "Crónica general" y bajo el subtítulo "Impresiones a granel", se aludía a los "acontecimientos que hace apenas un lustro no podíamos prever, al menos en la intensidad con que se han producido", tales serán la quema de conventos o la expulsión de miembros del episcopado, "sobre todas ellas la del Excmo. Sr. Cardenal Primado... ya que fácilmente puede verse en la persona del Sr. Cardenal, herida a la Iglesia española". Acababa señalando: "Hemos visto cómo se han levantado las protestas de todos los ámbitos de la nación, y ello no deja de consolarnos; pero vivamente hemos de desear todos que sirva esta lección para una más eficaz actuación, dentro siempre de las leyes, y con el necesario acatamiento de los poderes constituidos, según es deseo de la Iglesia". (Ibid., pág. 139).

Comenzaba el prelado señalando que su protesta lo era en nombre propio y en el de todo el clero de la diócesis, asociaciones, gremios piadosos y todos los "verdaderos católicos" que eran la "inmensa mayoría" de la provincia, y que se veían ahora precisados a exponer la "injustificada anticanónica expulsión o expatriación violenta impuesta y requerida por el sectarismo", del primado y de los obispos de Vitoria y Málaga, hecho que había de impedir "la simpatía y arraigo de la advenida República por ellos noblemente reconocida".

Ante la ofensa inferida a la España católica por tal proceder pedía "la renovación, anulación y reforma de semejante decreto, y aun de todos los demás decretos inspirados y repletos de idénticos odios sectarios a Jesucristo y su Iglesia, decretos a todas luces improcedentes por ser, aparte de otras razones, anticonstitucionales violadores del Concordato vigente con la Santa Sede y audaces retos de la fuerza a la conciencia católica de los españoles". Entre tales decretos incluía el prelado los relativos al establecimiento de la libertad de cultos, la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas, la prohibición de la asistencia oficial de la autoridades civiles y militares a los actos de culto, la amenaza de despojo a las órdenes religiosas, y el amparo general del laicismo. Todas estas medidas conducían, a juicio del obispo, a una "república de cuño soviético" incompatible con las "creencias, tradiciones, leyes y

(28) Amen de querer obviar, en una crasa ignorancia, la situación de elecciones a cortes constituyentes que se vivía, invocando la consultación de una constitución inexistente, el Dr. CERVINO era, sin duda, excesivo al calificar de "retos de la fuerza" las normas dictadas por el gobierno provisional en uso de sus legítimos poderes.

cultos de esta siempre católica nación".⁽¹²⁹⁾

Queremos aludir ahora al concentrado telegrama que, cursado por el administrador apostólico de Ibiza, fue también reproducido por el BOE de Toledo; en el, sucintamente, se hacía referencia a todas y cada una de las medidas adoptadas hasta la fecha por el gobierno provisional:

"Obispo Administrador, Cabildo Catedral, Parrocos, Clero, Acción Católica, Asociaciones piadosas ambos sexos diócesis Ibiza, interpretando sentir inmensa mayoría habitantes Isla, apenados conculcación manifiesta derechos inalienables Jesucristo, elevan respetuosa, energía (sic) protesta propagandas disolventes, sacrilego incendio conventos, disposiciones dadas, propósitos se anuncian, expulsión eminentísimo Primado, Excmos. Sres. Obispos; suplican inmediata repatriación, garantía sagradas personas, ministerio pastoral santos varones, óptimos ciudadanos celosos cooperadores bien común, orden social."⁽¹³⁰⁾

Por último hemos de señalar la falta de constancia en el boletín diocesano de que el obispo de Huesca, Dn. COLUM y CAÑALS, se dirigiera al gobierno, si bien dicho boletín, tras la publicación de la carta de SEGURA al presidente del gobierno de 15 de junio, que tomaba del boletín eclesiástico de Toledo del día 26, añadía la siguiente nota:

(129) 25 de junio de 1931, "Al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno provisional, Madrid". BOE de Orense, año 98, 27 de junio de 1931, núm. 13, págs. 216-218. Lo aislado de la enumeración de agravios del Dr. CERVIAO, en contra de la actitud seguida por la gran mayoría del episcopado, y su personal estilo, nos llevan a incluir esta protesta en el Apéndice (ver núm. 15). Este documento fue también publicado en el BOE de Toledo de 23 de julio de 1931, núm. 14, págs. 250-251.

(130) 3 de julio de 1931, BOE de Toledo, año 87, 23 de julio de 1931, núm. 14, pág. 252.

"Nuestra protesta: Al mismo tiempo que expresamos nuestra mas energica protesta por los vandálicos incendios de iglesias y conventos, protestamos por la injustificada expatriacion del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado, impuesta por el Gobierno provisional."⁽¹³¹⁾

Se deduce de cuanto llevamos expuesto que, salvo la extensa y lógica reseña dada por el boletín eclesiástico de Toledo, la actitud general de la jerarquía española ante la expulsión del cardenal primado, puede calificarse, a nivel público -es decir, como reaccion a conocer por los fieles y, por tanto, a influir en ellos- de muy discreta y acorde con la actitud de acatamiento y colaboración con el poder constituido seguida desde un principio.

Respecto al clero, cabildos catedralicios, organizaciones de acción católica, asociaciones piadosas y particulares, es difícil calibrar la amplitud de su reaccion, salvo la referencia, ya aludida, dada por el boletín de Toledo de 25 de junio, pues es lo cierto que las protestas cursadas por el conjunto de sacerdotes y fieles tampoco tuvieron una gran difusión por medio de los distintos boletines diocesanos.⁽¹³²⁾

(131) BOE de Huesca, año 80, 1 de julio de 1931, núm. 7, págs. 408-411.

(132) Las excepciones que hemos encontrado a esta conducta general entre los boletines examinados, son las siguientes:

El boletín de Coria publicó los telegramas dirigidos por el cabildo tanto al nuncio, uniéndose a la protesta cursada por éste, como al jefe del gobierno invocando sus sentimientos católicos y pidiendo respetuosamente el regreso del cardenal primado. A ello añadía la propia protesta del boletín (BOE de Coria, año 66, 15 de julio de 1931, núm. 14, págs. 222-223). El boletín de Palencia aludía al envío de telegramas por el cabildo catedral, la junta diocesana de acción católica y "otras entidades", pero sin publicarlos. (BOE de Palencia, año 81, 1 de julio de 1931, núm. 14, pag. 443). El boletín de Segovia publicó el telegrama dirigido por varios párrocos de la diócesis al presidente del gobierno provisional, telegrama en el que, contrariamente a la tesis de VIDAL y TEDESCHINI, calificaban a SEGURA de "Jefe

Mencion aparte merece, para acabar, la "Protesta elevada al Sr. Presidente del Gobierno provisional de la Republica por la Asociacion diocesana del clero de Toledo", protesta en la que, como complemento de todas las quejas hechas por la actuacion seguida contra el Cardenal SEGURA, se denunciaba ahora el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Toledo a fin de pedir la definitiva expulsion del primado, insistiéndose en la actitud antirreligiosa general de la Corporacion.¹¹³³

de la Iglesia Católica en nuestra Patria", protestando por su expulsión y pidiendo su inmediato regreso "por el honor y el buen nombre de la Patria Republicana Española" (18 de junio de 1931, BDE de Segovia, año 76, 15 de julio de 1931, núm. 13, pag. 286).

El boletín de Tuy publicó el telegrama dirigido por la acción católica de la diócesis al presidente del gobierno protestando por la expulsión del cardenal y solicitando que se revocara esa medida "excepcional por injustificada" (s. f. BDE de Tuy, año 72, 15 de julio de 1931, núm. 12, pag. 291-292). (La misma junta había dirigido otro al ministro de Instrucción pública contra las disposiciones laicas en materia de enseñanza, que publicaba el mismo boletín, ver el capítulo relativo a la cuestión de la enseñanza).

Por último, el boletín de Toledo, aludiendo a la imposibilidad de incluirlo en el número extraordinario anterior, recogía, junto a las de los cuatro únicos prelados publicadas, antes señaladas, la protesta del cabildo de Sigüenza. (BDE de Toledo, año 87, 23 de julio de 1931, núm. 14, pag. 282).

1133)

"El Ayuntamiento de Toledo, desviándose de su gestión administrativa, única peculiar suya, invade frecuentemente la esfera política de sus deliberaciones y acuerdos, con perjuicio de los intereses de la ciudad.

Prevalido de la mayoría del número, llega a suscitarse cuestiones completamente ajenas a la Corporación municipal, que, por otra parte, tienen los sentimientos religiosos que los toledanos, en su mayor parte, digan cuanto quiera alguno de los representantes municipales, guardan y estiman con verdadero cariño y temor de creyentes.

Así ha ocurrido, Excelentísimo Señor, con el reciente acuerdo de pedir la definitiva expulsión del Eminentísimo Sr. Cardenal Arzobispo de esta Diócesis, tomado de un modo ocasional y sectario, y desde luego invadiendo atribuciones que no son de las Corporaciones municipales, y sobre todo, queriendo hacer ver que tal acuerdo obedece a un estado de ánimo general en esta ciudad.

Se olvida el Ayuntamiento de Toledo de la actuación apostólica y abnegada del Eminentísimo Señor Cardenal Segura, de su caridad inagotable para con todos, que se extiende hasta límites insospechados, y sin aducir razón alguna, toma un acuerdo que ofende los sentimientos de cuantos admiramos las virtudes sacerdotales preclarísimas de nuestro amadísimo Prelado.

Y hay algo más: en la Corporación municipal se habla de un modo irreverente de nuestra Patrona la Virgen del Sagrario, combatiendo descomedidamente,

6. Los incendios de iglesias y conventos y los demás atentados y profanaciones en mayo de 1931.

6.1. La opinión de la jerarquía.

Pocos días después de proclamarse la República tuvo lugar la primera noticia sobre un acto vandálico contra la Iglesia perpetrado con el nuevo régimen. La daba el boletín eclesiástico de Coria y se refería al robo exclusivamente sacrilego (pues con independencia de las formas consagradas todos los objetos de la iglesia habían quedado intactos) perpetrado en las parroquias de Hinojal y Torrequemada. En la circular que el Dr. Dionisio MORENO BARRIO suscribió a consecuencia de este hecho, ordenando una serie de actos de

y escudado el ofensor en su privilegio de inmunidad, uno de los más grandes amores de los hijos de Toledo, al cual van vinculadas las glorias más excelsas de esta imperial ciudad. Y esto se hace, Excelentísimo Señor, con palabras en que expresamente se pretende hacer constar la incompatibilidad de los sentimientos religiosos con las opiniones políticas republicanas y democráticas, demostrando así que ignoran los más elementales principios de ética política y religiosa.

«Contra ese proceder, contra esos acuerdos, Excelentísimo Señor, elevamos a V.E. nuestra más enérgica protesta, que esperamos atienda según su recto sentido jurídico de salvaguardia y defensa tutelar de los derechos de todos los españoles, dentro del régimen de la República. Queremos impedir que, con nuestro silencio, se forme un ficticio y artificioso ambiente en la opinión, que hiciera creer que los acuerdos de un Municipio que olvida los intereses más urgentes que le están encomendados, son expresión genuina de los de todo un pueblo como el de Toledo.

«Y queremos, en fin, hacer llegar hasta V.E. el sentir de 600 sacerdotes que componen esta Asociación Diocesana, en cuyo nombre y representación acudimos.»

(23 de julio de 1931. "Sobre la expulsión de nuestro Prelado. Protesta elevada al Sr. Presidente del Gobierno Provisional de la República por la Asociación Diocesana del Clero de Toledo". BOE de Toledo. Año 87, 2 de agosto de 1931, núm. 15, págs. 265-266).

culto en desagravio de la ofensa cometida, no dejaba de destacar la excomunión en que, según el Derecho canónico, habían incurrido "ipso facto" los autores y, singularmente, de desear "que sean esos sacrilegios los últimos que se cometan en España y en el mundo entero."¹³⁴

El pacífico advenimiento del nuevo orden político, tan alabado por el Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA en su pastoral del día 27 de abril no podía hacer sospechar que el robo descrito por el obispo de Coria fuera otra cosa que un nuevo asalto, obra de unos fanáticos. Sin embargo, a los diez días de aparecer esta noticia iban a tener lugar los graves incendios y alborotos de 11 y 12 de mayo.

Las descripciones que diversos autores han dado de estos hechos nos exime de acudir a ellos una vez más.¹³⁵

(134) 23 de abril de 1931, Circular núm. 31, BOE de Coria, año 66, 1 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 125-127.

(135) La mayoría de ellos coinciden en resaltar la oscuridad que aun permanece sobre su origen y autoría, aunque algunos, como BRENNAN, según RAMÍREZ JIMÉNEZ destaca, atribuyen el incendio a la clase trabajadora (BRENNAN, Gerald, *El laberinto español*, París, 1960, pág. 180; nota 1) o RAMOS OLIVEIRA resalta, como también apunta RAMÍREZ, la frecuencia con que se imputa a los anarquistas (RAMOS OLIVEIRA, Antonio, *historia de España*, México, 1952, pág. 120). Ver, entre la bibliografía consultada CASTELL, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1767-1968)*, Madrid, 1973, págs. 365-367 (el autor da aquí una explicación de la tardanza del gobierno en declarar el estado de guerra en toda España). COMAS, Ramón, *Isidoro Gomá-Francesc Vidal i Barraquer. Dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1939*, Salamanca, 1977, págs. 72-73; la dudosa obra de Ramón GARRIGA; *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977, págs. 155-165; NÚÑEZ DE ARENAS, Manuel y TURÓN DE LARA, Manuel, *Historia del movimiento obrero español*, Barcelona, 1970, pág. 244; RAMÍREZ JIMÉNEZ, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969, págs. 205-206; TURÓN DE LARA, *La España del siglo XX*, Barcelona 1974, II, págs. 305-307. QUENCA TORIBIO destaca, por su parte, como el posible "entente" entre el régimen republicano y la Iglesia quedó truncado tras los incidentes de mayo, que "agravaron considerablemente las tensiones entre una y otra potestad" haciendo "ineficaz la efímera tregua de los moderados"; QUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia y Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid, 1985, pág. 28. También ARCELLO resalta como "la guerra de iglesias y conventos... fue el primer y rudo golpe a las relaciones entre Iglesia y

interesando ahora destacar tan solo como en la referida carta de VIDAL a PACELLI de 27 de junio aludía este a la posible parte de culpa del comandante Ramon FRANCO y de Pablo RADA, según la versión a que se refiere TUNON DE LARA en *La España del siglo XX*, citada, y a como "el Gobierno fue sorprendido, y no reprimió, o no pudo reprimir, los incendios y profanaciones desde el primer momento" dando a continuación su propia opinión sobre la causa de estos sucesos:

"Yo creo que los extremistas comprendieron que la obra verdaderamente revolucionaria intentada por algunos al proclamar la República, gracias a gestiones de personas sensatas, al sentimiento de responsabilidad que experimenta todo gobernante, y a la natural reacción, se les escapaba de las manos; provocaron los incendios para ver si la chispa prendía y, resultado de ello, venía la expulsión de las Ordenes Religiosas y la revolución social, política y religiosa, tal como pregonan aun hoy día en la prensa y en los mítines."

A ello añadía VIDAL como ALCALA ZAMORA también manifestaba su forma de apreciar el asunto en la carta que, en contestación a la que el cardenal le enviara el 17 de mayo protestando por todos estos hechos, amén de por las disposiciones dictadas por el gobierno referentes a la ense-

estado, no demasiado tensas hasta entonces": ARBELGA, Victor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931)*, Barcelona, 1976, págs. 17-18. (Es curioso que ARBELGA, uno de los recopiladores del archivo de VIDAL y BARRAQUER se refiera aquí a la carta enviada por este al Secretario de Estado Vaticano el 27 de junio como remitida al nuncio). Una bibliografía más específica sobre el tema la dan BATLLORI y ARBELGA en su citada recopilación *Església i Estat durant la segona República espanyola*, ver a estos efectos la nota núm. 2 de la pag. 61 del vol. I, en la que destacan la atribución de los incendios o a los comunistas o a los anarquistas, y la nota 110 en la pag. 97 del vol. II.

manza del catecismo"" "destino de algun prelado,""" encarcelamiento de algun sacerdote,""" y ciertas iniciativas de algunas autoridades y corporaciones locales...",""" le escribiera el presidente a vuelta de correo"" y, a

- (136) Ya hemos visto cómo la queja por las disposiciones secularizadoras se reitera por el arzobispo de Iaragona el 14 de junio.
- (137) Se refiere al Dr. Mateo MUGICA, obispo de Vitoria el mismo día 17 de mayo, cuestión esta a la que más adelante aludiremos.
- (138) Ver el epígrafe relativo al clero.
- (139) VIDAL aludia con esta frase -como más tarde haría publicamente el Dr. JURRITA (ver nota 142)- al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Gijón, dirigido a todos los de las capitales de provincias, en demanda de que fuera expulsada la Compañía de Jesús, (*Esglesia i Estat durant la segona...*, págs. 56-58).
- (140) ALCALA ZAMORA contestó, en efecto, el mismo día 23 de mayo y en su carta señalaba que "lo ocurrido fue, precisamente, la coincidencia funesta, que no debemos suponer concertada, por monstruosa y absurda, de las fuerzas opuestas a este Gobierno por uno y otro lado, imprudentes con exceso las de cierta tendencia, criminales con desbordamiento las de otra", pasando seguidamente a relatar los esfuerzos realizados por él y el resto del gobierno para paliar los hechos y proteger a las comunidades religiosas (entre ellos la "declaración del estado de guerra, los juicios sumarísimos en que ha habido ya penas severas hasta perpetuas, las destituciones numerosísimas de funcionarios de toda categoría, y las guardias militares y de fuerzas del Orden publico para proteger las Comunidades"), aunque no dejando de quejarse de que "algunas oruscaciones senaces de ciertas Ordenes, destacándose con manifiesta tendencia política de antiguo y reciente, no facilitaron tampoco, ciertamente, nuestro propósito", implícita referencia -como indican BATLLORI y ARBELDA- a la Compañía de Jesús. Acababa el presidente su carta alabando la postura de VIDAL que, indicaba, no era la adoptada con carácter general por la jerarquía (Op. cit., I, págs. 60-62). La alusión a una posible conabulación de las fuerzas opuestas al régimen (y, concretamente, monárquicos y comunistas) a fin de provocar una reacción contra la República también se contenía en el informe que los enviados del cardenal VIDAL, Dns. CARRERAS y VILAPLANA elevarían al Vaticano en el mes de noviembre y del que más adelante hablaremos. No obstante considerarían esta hipótesis poco fundada para concluir que los vandálicos actos respondían a un potente anticlericalismo cuya actuación el gobierno no había sabido prever ni controlar. El informe no dejaba de referirse también, entre otros posibles desencadenantes de la violencia, a la exaltación de los ánimos por el conocido monarquismo de SEGURA, comprometido por los comentarios de "ABC" y de "El Debate". (Op. cit., II, págs. 98-99). Miguel MAURA, ya ex-ministro, daría su versión de los hechos al fundar el Partido conservador de la República en enero de 1932, ("El Sol", 12 de enero de 1932. Ver apéndice num. 16), reiterando en sus distintas intervenciones como jefe del partido su exención de responsabilidad en los episodios de la quema de conventos ("El Sol", 25 de octubre de 1932).

continuación exponía al Secretario de Estado vaticano las gestiones efectuadas por él en Barcelona y Iarragona -donde, según expresaba, "en un círculo radical se había tomado el acuerdo de poner fuego a mi Palacio, al Seminario y a los conventos"- para evitar que en Cataluña cundiera el grave ejemplo. Tales gestiones habían consistido, esencialmente, (amen de las medidas de seguridad adoptadas respecto a colegios y conventos), en las entrevistas mantenidas con diversas autoridades -entre ellas CARNER y MACIÀ- a quienes había inculcado que si en Cataluña se lograba mantener el orden, la región ganaría mucho ante el extranjero e incluso ante la Sociedad de Naciones, "lo cual podría facilitar la solución favorable del pleito autonómico."¹⁴¹

La actuación del arzobispo de Iarragona no iba a limitarse, empero, a convencer a las autoridades catalanas para que evitaran, como hicieron, la propagación de la quema en la región o a cursar su sentida protesta al presidente del gobierno provisional por las luctuosas jornadas vividas en muchos puntos de España. Así como había expuesto a este en la referida carta deber de los preladados era, "prestando su leal apoyo y cooperación al Gobierno en todo cuanto se refiriera al bien público y orden social...; manifestar a los fieles su condolencia por los hechos lamentables últimamente ocurridos, pero en términos tales que, sin manifestar oposición alguna contra el nuevo régimen, eviten que cuanda el sentimiento de alarma y desaliento, y vean los fieles que saben defender los derechos de la Iglesia". Esta sincera ma-

(141) *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 79-94. MUNTANYOLA llega a indicar que uno de los argumentos empleados por el cardenal cerca de las autoridades autonómicas, en momentos de euforia autonomista, era la necesidad de que no imitaran a Madrid, razonamiento que había subrayado con la frase "¡No seas provincianos!". (Muntanyola, Ramon, *Vidal i Barraquer. El cardenal de la paz*, Barcelona, 1971, págs. 182, nota 153).

manifestación de su postura llevó al cardenal a escribir la circular de 14 de mayo de 1931, primer texto que hemos encontrado referido a los incendios de dicho mes proveniente de una pluma que, quizá consciente del desamparo de la Iglesia española por la ausencia del primado, se vio obligado a asumir la palabra ante los hechos acaecidos desde una región en la que, precisamente, el imperio del orden público había sido general.

Comenzaba VIDAL recordando como recientemente había exhortado a todos al acatamiento a los poderes constituidos, cuestión en la que ahora insistía para reiterar que el deber de las autoridades de procurar el bien común era más eficaz cuando venía acompañado de la asistencia ciudadana, actitud de la que, decía, había dado ahora ejemplo Tarragona con su civismo, frente a lo acaecido en otras poblaciones españolas.

De estos hechos se lamentaba "con las mismas autoridades" y quería hacer pública su protesta expresando su solidaridad y condolencia a los prelados, sacerdotes, religiosos y religiosas que habían sufrido la angustia de los incendios, sentimientos que hacía extensivos "al Gobierno Provisional de la República, quien -v aquí VIDAL no dejaba de hacer una diplomática llamada de atención con argumentación similar a la esgrimida ante las autoridades catalanas-, como representante de una nación de abuelo y tradiciones caballerescas y cristianas, ha de experimentar, como Nos, hondo pesar por tales hechos que nos llenan de rubor ante el mundo civilizado".

Recomendaba oración y penitencia por los acontecimientos habidos para, al tiempo de realizar una expiación por lo sucedido, impetrar del cielo luz y gracia para los gobernantes y súbditos "en orden a la conservación de la

raz, al fomento del bienestar y prosperidad de la Iglesia y de la Patria..."

Mas si dolorosos habian sido los sucesos, los creyentes debian ser conscientes de los avisos de que a veces se valia la providencia para despertarlos de la apatia "y excitarnos a trabajar por la causa del bien", y en tradicionales razonamientos- "acrecentar la observancia de la disciplina eclesiastica, reprimir los excesos de la desenfrenada codicia, no echar en olvido el pudor y la honestidad, evitar la relajacion de costumbres, etc., que por todo ello se sigue la tibieza de la fe y languidece la caridad hacia Dios y el proximo", motivo por el que las estimulaba hacia la esperanza en el otro mundo y hacia el optimismo cristiano. Al ser en los momentos de prueba cuando los catolicos debian demostrar, siendo levadura de los pueblos, su fe y entereza de animo.

Los cristianos, en consecuencia, nunca debian perder su confianza en Dios y, tambien, en sus amigos, hermanos, directores, parrocos, obispos y en las autoridades, debiendo saber afrontar todas las dificultades "sin dejarnos llevar de exagerados subjetivismos, ilusorios infundios o alarmas injustificadas", frase con la que el cardenal queria reprimir en los fieles cualquier opinion contraria al proceder ultimo del gobierno.

Farraro especial dedicaba seguidamente el cardenal a los sacerdotes y religiosos y religiosas exhortandoles a la alegria en su fe y al cumplimiento de los deberes de su estado a fin de que sirvieran de ejemplo a cuantos les rodearan. A ello añadia unas frases de singular transcendencia, colofon de su reiterada llamada al acatamiento a las autoridades y a la colaboracion de todos, pese a los ultimos sucesos, en la construccion del mediano futuro con el nuevo regimen:

"Son demasiado trascendentes los actuales momentos para que dejemos de actuar con serenidad y alteza de miras, a fin de que todos los componentes de nuestra sociedad, elementos dirigentes y dirigidos, trabajen de consuno para la estabilidad de la paz, justicia y orden social, que son los fundamentos en que se apoya la cristiana civilización."

Finalizaba la circular (tras reiterar la necesidad de oracion y penitencia "para desarmar el brazo de la justicia divina irritada por los pecados de los hombres"), aludiendo a la inminente celebracion del "Corpus", festividad sobre la que, tras invitar a los fieles a su solemne celebracion, no dejaba de indicar, con su singular diplomacia orientada a la colaboracion, que se haria "de acuerdo con las respectivas autoridades".⁽¹⁴²⁾

(142) 14 de mayo de 1931, BDE de Tarragona, año 67, 20 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 209-215. La reproducción de este documento, primera de la reacción de la jerarquía ante los incendios de iglesias y conventos de los días 11 y 12 de mayo y uno de los mas singulares testimonios del talante de colaboración del cardenal con el régimen republicano, en *Iglesia y Estat durante la segunda república española* nos exime de reproducirla en el apéndice (ver op. cit., I, págs. 47-51, texto catalán y 51-56, texto castellano).

La circular fue publicada en los boletines diocesanos de la provincia eclesiástica tarraconense:

BDE de Tortosa, año 73, 30 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 181-183. El Dr. Félix BILBAO escribió un positivo prólogo, lleno de ánimo conciliador y colaborador, a la circular de VIDAL congratulándose, al igual que había hecho el cardenal respecto a Tarragona, del civismo de Tortosa y, en general, del demostrado en toda la diócesis y señalando como por parte del gobierno provisional también se habían reprobado los hechos, "en lo cual merece alabanza", aunque no dejaran de "causar zozobra a los católicos algunas de sus disposiciones relacionadas con asuntos religiosos" por lo que, al estar en tratos con la Santa Sede, esperaba que por ambas partes se llegara a acuerdos convenientes "que no nos toca prejuzgar, sino tan sólo secundar con todo cariño y buena voluntad". Mientras tanto los fieles habían de pedir por las necesidades de la Iglesia y de la patria y especialmente "para que el Señor ilumine y de fortaleza a las autoridades para trabajar eficazmente en el difícil empeño de procurar la paz social y el bien común", para lo cual necesario era tener el optimismo que el metropolitano describía en su circular y contrarrestar la propaganda de errores contra la fe con la propaganda de la verdad, a fin de que el pueblo conociera los beneficios de la religión y la

A esta circular aludiría el cardenal ILUNDAIN, arzobispo de Sevilla, en la carta que el 29 de mayo escribiera al cardenal VIDAL dándole breve cuenta del estado en que se encontraba su archidiócesis tras los incendios. Indicaba como la conmoción producida por ellos había sido muy grande, lo que provocaba un "estado de depresión espiritual" que podía tener como consecuencia que en algunas poblaciones no se celebrara la procesión del

verdadera actitud de sus servidores "para que nos conozcan tal cual somos y no como nos pintan", forma con la que se encontrarían "muchos corazones buenos, deseosos del orden, de la paz, de la libertad legítima y por lo mismo accesibles a los principios religiosos y a la influencia salvadora de la gracia divina"; así, debería utilizarse el arma de la propaganda "leal, noblemente, en beneficio del mismo orden social y del bien público, y en apoyo de los prestigios de la autoridad" e "inundar al mundo de hojas, folletos, libros, periódicos que derramen luz de verdad y alienten a la práctica de la virtud, que es lo que hace grandes a los pueblos"; BOE de Barcelona, año 74, 30 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 318-320; El Dr. IRURITA reprodujo los primeros párrafos de la circular de VIDAL y, tras ellos, pasó a recomendar, como el Dr. BILBAO, oraciones y actos de penitencia como expiación y reparación de los sucesos habidos y para impetrar luz y gracia para gobernantes y súbditos en orden a alcanzar la paz, el bienestar y la prosperidad tanto de la Iglesia como de la nación. Al hacer suya la protesta del cardenal aludía también "a algunos acuerdos corporativos que lesionan claramente los intereses religiosos de nuestra Patria", refiriéndose <como VIDAL había hecho cerca de ALCALA ZAMORA, pero en este caso publicamente> al acuerdo del Ayuntamiento de Gijón sobre la Compañía de Jesús; BOE de Urgel, año 76, 15 de junio de 1931, núm. 12, págs. 184-187; BOE de Gerona, año 75, 22 de junio de 1931, núm. 9, págs. 240-246.

También se publicó en otros boletines ajenos a la provincia tarraconense, así hizo, entre los consultados, el BOE de Pamplona, año 70, 15 de junio de 1931, núm. 1712, págs. 263-269.

Corpus en la forma acostumbrada."'' y ''''

Andalucía había sido, en efecto, una de las zonas más afectadas por la ola de profanaciones'''' y, dentro de ella, singularmente, en la provincia eclesiástica de Granada, la diócesis de Málaga, en la que en las dos luctuosas fechas habían arido más de cuarenta edificios religiosos, entre conventos e iglesias e incluido el propio palacio episcopal, razón por la que el obispo, Dr. Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, hubo de refugiarse en Gibraltar ante la violencia desatada contra la Iglesia. También por esta causa el boletín eclesiástico de la diócesis malagueña, es, entre todos los consultados, el que más referencias contiene sobre lo sucedido. Así,

(143) Ver lo apuntado en la nota 88 sobre la celebración de las procesiones del "Corpus".

(144) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 66-67. No deja de contrastar la violencia desatada los días 11 a 13 de mayo en amplias zonas de España con la calma vivida en otros puntos. Sirvan como botón de muestra la noticia de la reanudación del culto en una ermita de la provincia de Avila "después de veintiocho años" y tras la firma de un acuerdo entre la parroquia y el dueño de la dehesa en que estaba enclavada y por el que se reconocía a aquella su propiedad; la reanudación había tenido lugar el dos de mayo, celebrándose una misa y "reinando la mayor concordia y entusiasmo por parte de todos" (s.f., "Crónica Diocesana, Renovación del culto en la ermita de Nuestra Señora de la Estrella de Martínez", BOE de Avila, año 42, 16 de mayo de 1931, núm. 5, pág. 217) o, la más relevante, por la amplitud de la zona que abarcaba, de la referencia de la visita pastoral realizadas por el arzobispo publicada en el boletín de la archidiócesis de Burgos; dicha visita había tenido lugar el día 14 de abril y los días 4 a 16 de mayo, precisamente, efectuándose por una serie de arripresajos que incluían la larga lista de parroquias que el boletín recogía y en las que el arzobispo había administrado la confirmación. Resaltaba el cronista como el prelado había quedado "sumamente satisfecho del celo y diligencia de los Sres. Sacerdotes y de las atenciones y muestras de afecto, sumisión y cariño que le han prodigado el clero y los fieles de todas las Iglesias que ha visitado", (s.f., "Santa visita pastoral", BOE de Burgos, año 74, 30 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 277-278).

(145) Los violentos hechos en la archidiócesis de Sevilla dio lugar a la celebración, a final de mes, de actos de desagravios con gran afluencia de fieles ("El Debate", 31 de mayo de 1931).

a mediados del mes de mayo, fecha en que se publicaba la ya aludida pastoral escrita por el obispo el primer viernes del mes con el título "Honor a la Madre de Dios y paz a la Madre Patria" hubo de incluir el referido "post scriptum" justificando el retraso de esta publicación y describiendo la grave situación padecida en la capital:

"Escrita la anterior "Instrucción", fue impedida de salir a luz por la ola sacrilega de incendio y devastación que en dos días ha arrebatado a Dios en Málaga más de cuarenta templos y ha dejado sin hogar a multitud de parrocos, capellanes, religiosos y religiosas; sin escuela y sin refugio a miles de niños y niñas, en su mayoría pobres huérfanos, y al pobre del Obispo de cuyo palacio no han quedado más que los muros.

«Al publicarse hoy, subrayamos con toda la energía de nuestra alma los mandatos que en ella os dirigimos: "oremos y cumplamos con nuestro deber", si es preciso hasta el heroísmo, hasta el martirio... y si algo hemos de añadir, es este nuevo encargo: "perdonemos", como perdono el Maestro, enclavados en la cruz y dispuestos a morir por los mismos que nos crucifican.

«Así triunfo él y así triunfaremos nosotros ;desde la cruz!

«Sin casa donde vivir y dormir seguro, pues a las que habite por caridad después del incendio y saqueo de la misa sobrevinieron amenazas, pánicos y consternaciones, me vi obligado, Dios sabe cuán contra mi voluntad decidida y creo que probada, de vivir y morir entre mis queridos hijos, a refugiarme en estas hospitalarias tierras.

«Recibid la bendición de aliento, de fortaleza, de paz y de esperanza que desde lejos os envía deseando que las circunstancias permitan dársela de otro modo pronto."***"

(145) Ver nota 59. Figura, por error, en esta pastoral la fecha del 25 de mayo que no puede ser otra que la del 15 en que se publicó el boletín que la reproduce, "Honor a la Madre de Dios y paz a la Madre Patria. Post Scriptum", BOE de Málaga, año 64, 15 de mayo de 1931, núm. 6, págs. 163-164. Comentando las frases de este "post scriptum", señalaría el boletín eclesástico de Iuy, como preámbulo a su reproducción: "En esta página arde el espíritu propio de un

Transcurrido un mes de esta publicación, el boletín eclesiástico malagueño incluía en su sección "Cronica diocesana" un amplio y pormenorizado relato de los hechos del 11 y 12 de mayo que, según se indica, pese a las promesas de las autoridades locales, tuvieron como mas importantes consecuencias el total incendio del palacio episcopal y, ante las amenazas contra el, la huida del obispo a Gibraltar y la quema y profanación de numerosas

Apostol. Los sufrimientos del venerable Prelado han sido de martir, y Dios autorizada ha escrito de el que va tiene los honores del martirio".

A este comentario añadía el boletín una manifestación sobre el dolor que se sentía en la diócesis gallega "por las ofensas e injurias cometidas contra Jesucristo y su Iglesia en varias ciudades y pueblos de España y singularmente en las diócesis de Málaga y Murcia", y pedía "actos de reparación y suculda para que los perseguidores de la Iglesia sean iluminados". BDE de Tuy, año 71, 3 de junio de 1931, num. 16, págs. 232-234). También el boletín eclesiástico de Palencia reprodujo las palabras del obispo de Málaga añadiendo el mismo comentario que el de Tuy sobre el prelado BDE de Palencia, año 67, 5 de junio de 1931, num. 15, pag. 471).

Tras este "Post scriptum" del Dr. GONZALEZ BARCÍA, publicó el boletín eclesiástico del mes siguiente una breve nota titulada "El reinado del Corazón de Jesus en los tiempos presentes", en la que el autor Emilio ESPINOSA, comenzaba preguntándose como era posible relacionar la promesa del reinado del Corazón de Jesus en España con los incendios y profanaciones habidos. Para explicar tal relación indicaba que iba a aduniar algunos motivos y razones que "fortificarán la fe en tal reinado "por si el temor o la desconfianza se hubieran asomado a las almas de muchos cristianos", para ello trataba de lo misterioso de los caminos de la providencia y señalaba como la quema de iglesias y la destrucción de imágenes había hecho volver a Dios a muchos fieles que estaban apartados de la fe. Para corroborar esta optimista afirmación relataba seguidamente el caso de tres hombres en Almería que, al intentar derribar una imagen del Corazón de Jesus, sufrieron un grave accidente que les llevo a arrepentirse de su acción, e insistía en que muchos cristianos, a raíz de los últimos sucesos "han comenzado una vida del todo fervorosa y edificante". Por todo ello había que tener confianza en la divina providencia y en su amor que "en prueba nos tiene" y acababa diciendoo: "y seguros estemos que el triunfo será de Jesucristo. En unos por su ley, en otros por su Justicia y en los demás por su Amor". (s.f., "El reinado del Corazón de Jesus en los tiempos presentes, Motivos de confianza", BDE de Málaga, año 64, 15 de junio de 1931, num. 7, págs. 193-195. también publicado en el boletín de Santiago de Compostela, donde se indica que está tomado de la revista "El Granito de Arena", BDE de Santiago, año 70, 16 de noviembre de 1931, num. 2669, págs. 464-466).

iglesias, colegios y conventos, tanto en la capital como en la provincia.⁴⁷ El siguiente boletín diocesano ampliaba las noticias sobre los sucesos refiriendo el estado en que habían quedado los edificios religiosos incendiados y añadiendo a la anterior relación algunos no mencionados en ella.⁴⁸

(47) s.f. "Crónica diocesana", BDE de Málaga, año 64, 5 de junio de 1931, núm. 7, págs. 196-203, reproducido posteriormente por el BDE de Granada, año 86, 30 de junio de 1931, núm. 3482, págs. 645-651. El carácter de primera fuente de este relato nos lleva a incluirlo como apéndice número 7. Este número del boletín publicado también una nota, sin fecha ni firma, bajo el título "El Corazón de Jesús y el Derecho canónico" en la que, tras señalar que este no constituía una serie de normas rígidas que regulaban la vida eclesial sino que encarnaban "la ternura paternal y la misericordia del Sagrado Corazón", del que emanaban las leyes, añadía:

"Por esto, en la noche más trágica de la historia de Málaga, cuando el palacio episcopal y numerosas iglesias y conventos eran convertidos en inmensas hogueras mientras el populacho se entregaba a los crímenes y sacrilegios más atroces en infernal orgía y las gigantescas llamas iluminaban la imagen bendita del Corazón de Jesús entronizada sobre el Seminario, él, majestuoso, mostraba y muestra la hostia y la cruz, los dos grandes símbolos de la Ley Cristiana, patentizando que a pesar de tan horribles provocaciones, el Corazón de Jesús, que es el Corazón de la Iglesia Católica, es el Arca que guarda la ley, no de terror y de venganzas, sino de gracia, de perdón y de misericordia para todos los pecadores" (ibid., págs. 192-193).

(48) s.f. "Crónica diocesana", BDE de Málaga, año 64, 15 de julio de 1931, núm. 8, págs. 231-232. Ver apéndice núm. 18. La paginación de los boletines eclesiales de Málaga sufre una errata en esta página (que figura con el número 322 y que se mantiene en los boletines posteriores variándose, por tanto, la numeración en todos ellos. A esta numeración nos atenemos en lo sucesivo). La crónica referenciada acaba señalando, bajo el título "El Jubileo en la catedral" como a los pocos días de abrirse nuevamente el culto en ella, se celebró el "Jubileo circular", dedicándose el mes de junio a actos de culto al Sagrado Corazón en reparación por los hechos acaecidos.

Este número del boletín incluía también una breve nota del Dr. GONZÁLEZ GARCÍA firmada, como el "Post scriptum" anterior, desde su exilio en Gibraltar y en la que el prelado quería transmitir al pueblo malagueño los riesgos de abandonar religioso que podía sufrir con su grave actuación.

Señalaba así el obispo que al arrojar a Cristo de la diócesis (pues esta era, a su juicio, la consecuencia inmediata de los hechos) con él se alejaban todas las virtudes teológicas, idea que resumía en el final del escrito no sin una clara alusión respectiva a las autoritarias y políticas:

"Cuando Jesús se va, y nunca se va si no lo echan, cuando Jesús es echado, con él se va su corte, y los que lo echan, pese a sus filosofías y elocuencias, a sus políticas y pedagogías, a sus poderes y maquinaciones, se quedan sin Pureza, sin Humildad, sin Fe, sin Esperanza y sin Caridad...

¡Pobres pueblos y pobres almas sin Jesús y sin su corte...!

¡Corazon de Jesús, por tu Madre Inmaculada, perdona y vuelve a tu España." (149)

Junto a estas serias advertencias del Dr. GONZÁLEZ, el boletín diocesano de Málaga volvería a publicar, por último y ya en el mes de agosto, como complemento de las relaciones de edificios incendiados que había dado, una relación de las obras de arte destruidas o robadas durante la quema o a con-

(149) s.f., "Lo que se va cuando se va Jesús", BOE de Málaga, año 64. 15 de julio de 1960, núm. 8, págs. 227-228.

secuencia de ella."...

Para cerrar esta referencia del boletín eclesiástico del obispado de Málaga a las profanaciones y saqueos realizados, hay que aludir, por último, a la nota del vicario general que, en relación con la lista anteriormente mencionada, publicaba el número de 15 de septiembre y por la que se llamaba la atención de los parrocos, religiosos y fieles para que se abstuvieran de "comprar ornamentos, calices y otros objetos de culto que ofrecen ventajosamente ciertos individuos y que nos hacen recordadamente recordar los robos sacrilegos perpetrados en mayo último."...

Mas junto a estas descripciones, relaciones e instrucciones, había publicado también el boletín malagueño la adhesión del clero de la ciudad a su exilado obispo. Así, residiendo este ya en Gibraltar, el número del 15 de julio contenía dos mensajes de unión, uno de los parrocos de la capital y el otro del cabildo catedralicio.

(150) s.f., BOE de Málaga, año 64, 15 de agosto de 1931, núm. 9, págs. 362-364, Ver apéndice núm. 19. Esta relación fue publicada en separata independiente, conjuntamente con la crónica diocesana titulada "Los días sacrilegos", anteriormente aludida, y como colofón de la misma, bajo el título "Los sucesos del 11 y 12 de mayo". La separata indica que su texto está tomado del boletín oficial eclesiástico. Hemos encontrado este documento -que no lleva fecha- encuadrado con los números del boletín de Málaga correspondientes a 1931 en el tomo consultado en la biblioteca del palacio episcopal de dicha diócesis. El boletín de 15 de agosto publicaba también una circular del Dr. GONZÁLEZ, fechada en Gibraltar, determinando los requisitos a cumplir para la celebración de matrimonios en aquellos casos en que, por haber sido destruidos los libros sacramentales de sus parroquias, no pudieran los contrayentes aportar copia de la partida de bautismo (12 de agosto de 1931, "Circular sobre entable de partidas bautismales y anotaciones conforme al C.470, pº 2º", *Ibid.*, págs. 354-355). Ya en 1933 el prelado pasaría a pedir a las religiosas diversos datos para rehacer los documentos quemados en el incendio del palacio episcopal (s.f., "Aviso a las Religiosas", BOE de Málaga, año 66, marzo de 1933, núm. 3, pag. 80).

(151) 12 de septiembre de 1931, "Aviso a los Parrocos, Religiosos y fieles", BOE de Málaga, año 64, 15 de septiembre de 1931, núm. 10, pag. 365.

representaban los párrocos como los hechos del 11 y 12 de Mayo habían conmovido y conternado sus almas, desorientándoles, confundiéndoles y entristeciéndoles el conocimiento posterior de la extensión e intensidad de los daños ocasionados, razón por la que se sentían abatidos y desamparados.

"Nada mas justificado: una oleada gigantesca de satanismo habia asolado en unas horas el grandioso tesoro material y espiritual acumulado durante siglos por la fe y piedad de muchas generaciones en mas de 40 templos, en el Palacio Episcopal y en multitud de casas religiosas; habia arrojado a v. E., nuestro Padre amado, de su casa, empujándolo fuera de ella las llamas de un voracísimo incendio y la hostilidad de la turba incendiaria; habia reducido a escombros el incendio o habia arrasado la mano sañuda de la plebe azuzada por enemigo consciente nuestras hermosas Iglesias parroquiales, con todos sus retablos y decorados, con todas sus imágenes, algunas de ellas valiosísimas obras de famosos artistas, y otras motivo predilecto y consolador del pueblo cristiano; habia robado y destruido las casas rectorales dejando en la calle y sin aguar a los pobres Párrocos; habia arrojado de sus casas de oración y penitencia a las inocentes religiosas de clausura poniéndolas en la necesidad apremiante de buscar amparo en la caridad de los vecinos, habia dispersado y dejado también sin hogar a los religiosos que dedicaban su vida sirviendo a Dios Nuestro Señor en la educación cristiana de la juventud, y también sin casa y sin amparo a pobres niños, que no tenían otro amparo ni casa que la que les daba la inagotable caridad de la Iglesia; habia violado las sepulturas y profanado y escarnecido los cadáveres... y aun esta ola infernal se debatía en esfuerzos brutales y en embestidas furiosas porque no habían logrado desahuciar por completo a Dios y a su Santísima Madre de Malaga..."

Habia sido la necesidad de organizar urgentemente, bajo la dirección del vicario general y del dean de la catedral, los servicios que requerían las difíciles circunstancias, amen de la separación obligada de algún sacerdote, lo que había impedido enviar antes este mensaje, pero por el querían los parrocos, en ese momento en unión del clero, congregaciones religiosas y fieles de sus parroquias, afirmar al prelado que, aparte de las diestras inferidas a Dios, lo que más sentían era la sedna a el mismo "por el desacato, injusticia y desafiuro con que ha sido tratado por su pueblo" y que había tenido como consecuencia el verle obligadamente ausente. 57

El escrito del cabildo catedralicio, firmado en su nombre por el dean, era mas breve que el anterior pero, no obstante, igualmente descriptivo.

Comenzaba indicando que no podían guardar silencio en aquellas circunstancias que, precisamente, eran, tambien, las que les habían impedido suscribir antes el mensaje que entonces querían elevar. El cabildo, como habían hecho los parrocos, se refería seguidamente a los hechos:

"...incendio de casas religiosas, quedando sin albergue las esposas del Cordero Inmaculado; reduccion a escombros de iglesias parroquiales, quedando los fieles enfermos sin lugar donde pedir los ultimos sacramentos en los momentos supremos de tener que comparecer ante el Tribunal Divino; saqueadas algunas casas de capellanes que habitaban en edificios adosados a iglesias; destruido por el fuego vuestro mismo Palacio Episcopal, dejando a V.E.I. sin casa en que habitar y sin oficinas donde poder despachar los asuntos propios de su elevado cargo, y V.E.I. mis-

(152) 6 de junio de 1931, "Documento de adhesión y protesta del V. Cabildo de Curas Parrocos de la Ciudad", BDE de Málaga, año 64, 15 de julio de 1931, num. 8, págs. 229-231.

no amenazado de muerte por la turba desenfrenada y obligado a abandonar la Diócesis, y sobre todo profanado y pisoteado el Augusto Sacramento de la Eucaristía, con el espectáculo de ver los ornamentos y vasos sagrados arrebatados por las turbas y unos quemados en formidables hogueras y otros paseados por las calles con signos de la mayor profanación y escándalo."

Manifestaba el cabildo su protesta por todos estos actos expresando su adhesión al prelado, su empeño en procurar por todos los medios "la restauración del espíritu cristiano tan decado y vulnerado por estos acontecimientos" y su deseo del pronto regreso del obispo.***

Cierra la referencia del boletín diocesano de Málaga a las trágicas fechas de mayo de 1931 la publicación de las palabras pronunciadas por el Dr. MONZALEZ GARCIA con motivo de la ordenación que hizo en Gibraltar de siete nuevos sacerdotes. Diría el obispo en su homilía, en una actitud muy distinta a la que había informado su último escrito "Lo que se va cuando se va Jesús", que no era su propósito dar "una nota triste, nota de pesimismo, como parece reclamar la actual situación de nuestra Patria y de nuestra amadísima Diócesis de Málaga", sino, antes al contrario, una nota de esperanza ante la omnipotencia de Dios manifestada por el perdón y la compasión; por ello los nuevos sacerdotes debían llevar a la diócesis, "entre hombres que os aborrecen y persiguen", ese perdón para los que se arrepintieran y su compasión para los que se obstinasen en el pecado, actitud de la que eran prueba ellos mismos, ya que la providencia

(153) 9 de junio de 1931, "Documento de adhesión y protesta del Excmo. Cabildo Catedral", *ibid.*, págs. 226-229.

enviaba nuevos sacerdotes a Málaga, pagando de esta forma a la ciudad los sacrilegios, persecuciones e incendios; no debían, pues, sorprenderse por "las ingratitudes, ni las persecuciones, por crueles que sean" ya que, ante ellas, habrían de recordar las palabras del evangelio y ser "corderos en medio de lobos".

Hemos querido aludir ampliamente a todos los documentos publicados por el boletín eclesiástico de Málaga por ser en

(154) s. t. "Crónica", BDE de Málaga, año 64, 15 de agosto de 1931, núm. 9, págs. 359-362, el Dr. GONZÁLEZ GARCÍA pasaria cerca de ocho meses en Gibraltar regresando a la diócesis de Málaga el 26 de enero de 1932 ("Crónica Diocesana", BDE de Málaga, año 65, enero de 1932, núm. 1, págs. 33-34), si bien no se instaló en la capital sino en Ronda, donde el obispado tenía un pabellón unido al colegio de los padres salesianos, en razón a que en esta localidad, aunque las autoridades eran también de izquierdas, no se había dado la violencia que tuviera lugar en Málaga en mayo de 1931. Permaneció en Ronda siete meses al cabo de los cuales salió el 29 de julio para pasar las vacaciones en Elorrio (Vizcaya) como solía hacer siempre y marchando desde allí a Roma para realizar la visita "ad limina". Al pasar de regreso a Madrid visitó al nuncio que le convenció de la necesidad de que no volviera a Málaga, pues no era prudente regresar para que las izquierdas dijeran que se trataba de una provocación; en noviembre volvió a Roma y, tras su viaje, pasó a instalarse definitivamente en Madrid, siguiendo los consejos del nuncio que le indicó que en Ronda también se habían alterado los ánimos, hasta que el 5 de agosto de 1925, y tras otros dos desplazamientos en 1934 a Roma y a Elorrio, fue nombrado obispo de Palencia; Ver CAMPOS GILES, José María, *El obispo del sagrario abandonado: biografía del Excmo. Sr. D. Manuel González y García, obispo de Palencia y antes de Málaga, fundador de la Pia Unión de Marías de los sagrarios-calvarios, y discípulo de San Juan y del Instituto de HH. Marías Nazarenas*, Palencia, 1950.

esta diócesis donde mayor dureza revistieron los graves hechos también sufridos por otras provincias españolas y donde, por ello, el boletín recogió con mayor detalle la descripción de la devastación sufrida y las trases sobre sus consecuencias.

Los boletines de las otras diócesis que también padecieron la ola de sacrilegos incendios apenas contienen referencia a los mismos, como es el caso de Madrid, donde, curiosamente, su boletín eclesiástico no solo no publicó crónicas ni relaciones semejantes a las de Málaga, sino que su obispo, el Dr. BIJO y GARAY tampoco quiso hacer alusión escrita alguna a los hechos de los días 11 y 12 de mayo, apareciendo en este boletín tan solo una referencia indirecta a ellos al dar a luz, a mediados de julio, la relación de las cantidades recaudadas en beneficio de los sacerdotes seculares damnificados por los incendios y saqueos, siendo este, además, el único boletín, entre los consultados, en que se publica algo semejante.⁽¹⁵⁵⁾

Los prelados de otras diócesis y archidiócesis menos afectadas (o no afectadas en absoluto como era el caso, ya visto, de Tarragona) si se retirieron, por el contrario, a

(155) S.F. "Suscripción a beneficio de los sacerdotes seculares damnificados en los incendios del 11 de Mayo", BOE de Madrid-Alcalá, año 46, 15 de julio de 1991, núm. 1539, págs. 295-297. En la obra llena de tópicos que, bajo el pseudónimo de KODASVER, publicó un sacerdote madrileño narrando la vida de la diócesis en el período 1913-1963 tampoco aparece referencia alguna a los incendios que tuvieron lugar en la capital. (KODASVER, *Medio siglo de vida diocesana madrileña*, Madrid, 1967, págs. 113-120).

la serie de incendios y profanaciones. Tal haría el arzobispo de Valencia, Dr. Prudencio MELÓ ALCALDE que, pese a los daños sufridos en su archidiócesis -singularmente en Alicante- se limitaría a redactar una breve circular el 15 de mayo en la que -con su conciliadora actitud ante la República y al igual que el día anterior había hecho VIDAL¹⁶⁶- no dejaba de recordar a los fieles las advertencias hechas en su anterior de 17 de abril sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos, señalando como esperaba en esos momentos del clero y de los fieles que siguieran sus consejos "para gloria de nuestra santa religión y para bien de nuestra Patria": a ello añadía que "profundamente conmovidos por las profanaciones y violencias cometidas en estos días y que pedimos a Dios Nuestro Señor perdone como Nosotros perdonamos y debemos perdonar todos desde el fondo de nuestro corazón cristiano", debía dirigirse la debida reparación a Dios y pedir "nos conceda los bienes de la paz y del orden y las gracias del acierto en los gobernantes y en los gobernados", a cuyo fin disponía diversos actos de culto para los meses de mayo y junio.¹⁶⁷

(166) No parece plausible imaginar que esta coincidencia de planteamientos se debiera a que el arzobispo de Tarragona conociera la Circular del de Valencia antes de redactar la suya (que, aunque de fecha anterior, fue publicada cinco días después de la del Dr. MELÓ en el boletín eclesástico). Aparte de la innegable similitud de reacción ante el advenimiento y hechos de la República y, por ende, de talante religioso-político, sólo cabe, en última hipótesis, y en todo caso, pensar en la posibilidad de contactos telefónicos pues, no hay correspondencia entre los dos arzobispos en esas fechas.

(167) 15 de mayo de 1931, "Circular num. 5 "Roqueamos por la paz y el orden", BOE de Valencia, 15 de mayo de 1931, num. 2123, pág. 155.

...mandos el obispo de Lugo y administrador apostólico de Mondoñedo Sr. Rafael BALANZA NAVARRO, se dirigiera a los fieles de su diócesis con motivo de las festividades religiosas propias del mes de junio v. tras exhortales a realizar las devociones de esas fechas, no dejaría de referirse a "las circunstancias gravísimas y críticos días que nuestra querida Patria atraviesa y los sacrilegios horrendos y numerosos que en su suelo bendito acaban de cometerse", hechos que exigen del cielo y fieles la correspondiente oración, tanto como desagravio como para impetrar la clemencia divina sobre España. A estos efectos el mismo número del boletín diocesano de Mondoñedo anunciaba, siguiendo los deseos del prelado, la celebración de un tríduo en la catedral a fin de pedir "la paz y prosperidad de la Patria, de la Religión y de la Iglesia en España y desagraviar al Señor por los fluctuosos acontecimientos y profanaciones de estos días contra las iglesias, conventos y otros edificios... remedie los males que nos afligen y aleje los que nos amenazan"....

No haría el obispo de Segovia declaración alguna sobre

(188) 17 de mayo de 1931. "Circular sobre el Mes del Sagrado Corazón" y "Tríduo de rogativas y desagravios con Exposición de su Divina Majestad", BOE de Mondoñedo, año 74, 26 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 66-67.

estos hechos, "" pero ya hemos visto "" como ""mas de

(159) La publicación de las manifestaciones de los seglares en los boletines diocesanos suponía la conformidad y asunción de sus declaraciones por parte de la jerarquía. Ello se desprende claramente de la consideración del boletín eclesiástico como "portavoz de la Autoridad de la Iglesia" y "órgano oficial" del clero y órdenes religiosas en cada diócesis, sirviendo como corroboración de esta afirmación y a título de ejemplo la siguiente descripción que sobre el boletín diocesano publicó el de Orihuela en la segunda página del primer número del año 1932:

"Con el presente número viene el *Boletín de la Diócesis de Orihuela* a dar un aldabonazo a las conciencias de todos los católicos ante las nuevas necesidades que la realidad social y religiosa nos exigen.

La vida de la Iglesia ha de desarrollarse en adelante en un plan de contacto y comunicación mas inmediata y directa entre la Autoridad y los fieles, entre la cabeza y aquellos miembros seglares, cooperadores del apostolado, que es necesario establecer y vigorizar en todas las parroquias, si hemos de aspirar a que estas tengan vida propia y pujante. La Acción Católica es precisamente la participación de los seglares en el Apostolado jerárquico de la Iglesia, y si ha de ejercer su función propia, necesita estar doctrinada e inspirarse constantemente en las orientaciones que traza el magisterio de la misma.

El Boletín será, pues, el vehículo de las normas y del pensamiento del Prelado, no solo para los Párrocos y Rectores de iglesias e Institutos religiosos, sino para todas las organizaciones católicas y para todos los diocesanos.

El Boletín será el eco de todas las entidades de Acción Católica de la Diócesis.

El Boletín será el pregonero de la vida parroquial.

El Boletín acusará los grados de sensible generosidad de los fieles para con el Culto y sus Ministros.

El Boletín será, en una palabra, el portavoz de la Autoridad de la Iglesia y el grufito de la piedad de sus subditos.

En consecuencia con estos fines de orden de Su Excia. Rvmda, el Boletín ha de ser:

1.º. El órgano oficial, como hasta ahora, de los párrocos, rectores de iglesias e Institutos religiosos.

2.º. Ha de ser considerado asimismo como el órgano de todas las entidades de Acción Católica, de todas las asociaciones piadosas y de todas aquellas personas que ajen con celo e interés el desenvolvimiento de la vida cristiana en nuestra Diócesis.

3.º. Ha de ser la lectura indispensable de cuantos quieran tener un mismo sentir y pensar con la Iglesia y quieran participar en la defensa de los sacratísimos intereses de la Religión y de las almas.

Para estos altos propósitos, no dudamos en requerir la valerosa cooperación de todos, seguros de su eficaz ayuda. Esta ha de consistir primeramente en la aceptación y simpatía con que reciban la publicación; después, en que se dignen honrar con su nombre la lista de los suscriptores.

Con el fin de que la suscripción sea accesible a todos los católicos y mediante el aumento de tirada sea pronto posible desgravar este peso económico de las fábricas de las iglesias, el precio de suscripción para las personas particulares será de seis pesetas al año.

(c.f. "Sobre el boletín de la diócesis de Orihuela", BOE de Orihuela, año 51, 2 de enero de 1932, núm. 1, pág. 2).

(160) Ver la nota núm. 119.

cinco mil mujeres" de esta diócesis habían elevado una "exposición de protesta" al presidente del gobierno provisional. En la que, entre otros extremos de la actualidad, se referían precisamente a

"...los vandálicos incendios de conventos, iglesias, profanaciones de personas y cosas sagradas cometidas recientemente en Madrid y otras poblaciones, con las tristes circunstancias de impunidad, que las agravaron muy especialmente, con la petición de castigos para tales desmanes a fin de evitar su repetición y de que en adelante pueda sentirse respetada y garantizada toda propiedad, y que se de la debida reparación de los daños causados." "

La diócesis de Segovia fue así, como se desprende del contenido de esta exposición, la única que, junto a su queja, alzó la voz para pedir al gobierno tanto el castigo de los culpables, como la reparación de los daños sufridos.

En igual línea y aprovechando la misma ocasión que el Sr. BALANZA NAVARRO, el obispo de Salamanca, Sr. Francisco BAYLOS VALIENTE, se referiría, en su circular del mes de junio al "Amor ultrajado hasta extremos inconcebibles", y a "la justicia que tremenda se cierne sobre esta pobre nación, en la cual Jesús quiso reinar como en ninguna y donde de modo insensato pretendese por tantos expulsarle", por lo cual los católicos deberían expiar las ofensas que se le inferían "derivadas unas de la debilidad nativa humana, otras muchas hijas de la inconsciencia y algunas producidas por el odio satánico, que es la peor de las desventuras que

al hombre pueden sobrevenir", y hacer extender la caridad cristiana "que es justicia social y sacrificio evangélico, y con la cual solo es posible la salvación individual y la de España".

A continuación de esta circular publicaba el boletín el "Acto de desagravios al Sagrado Corazón de Jesús" al que, aunque no fuese original de la diócesis, pues, según se indica en la publicación, estaba mandado que se hiciera en todas las iglesias del mundo el día de tal festividad, queremos añadir por lo representativo que resulta de la mentalidad de la Iglesia de la época, singularmente el párrafo en que se trata de la expiación de las ofensas ajenas y cuya última frase era especialmente adecuada para la situación española desde el punto de vista de muchos miembros de la jerarquía:

"Nosotros queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y de los vestidos, las innumerables asechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra Vos y contra vuestros Santos, los insultos dirigidos a vuestro Vicario y al Orden Sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo Sacramento del Amor y, en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia por Vos fundada."...

(162) 24 de mayo de 1931, "Circular del Prelado sobre adoración y desagravios al Sagrado Corazón de Jesús", y "Acto de desagravios al Sagrado Corazón de Jesús", SED de Salamanca, año 78, 1 de junio de 1931, núm. 6, págs. 161-166.

también el Sr. Juan PERELLO Y POU, obispo de Vich, aprovechó su pastoral sobre el mes de junio para referirse a los hechos advirtiéndole que al ser Cristo la cabeza de la Iglesia toda persecución contra ella recaía en Él y señalando un tanto puerilmente -como si cupiera esperar una reacción distinta por parte del poder civil- que los sacrilegios cometidos lo habían sido "con tantos incendios y profanación de sagradas imágenes", que el mismo gobierno provisional los había reprobado. Por todo lo sucedido era, pues, preciso, realizar actos de desagravio "tan grandes y múltiples como han sido las ofensas cometidas"; por lo que pasaba a disponer diversos actos de culto a tales efectos.⁽¹⁶³⁾

Más extenso en sus consideraciones, según su ya destacado estilo fue, como no podía ser menos, el obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela, Sr. Isidro GOMA, que el 29 de mayo cogió la pluma para referirse singularmente a los incendios y profanaciones, aunque no sin dejar de aludir a las recientemente promulgadas disposiciones secularizadoras sobre enseñanza religiosa y libertad de cultos, en una simbiosis que parecía achacar el origen de unos y otros hechos a la voluntad del nuevo gobierno o, al menos, tal enlace de frases parecía buscar esa unión en el ánimo católico.

Así, con un estilo muy lejano a la concordia propugnada públicamente por VIDAL o por MELÓ comenzaba GOMA, como hemos apuntado, tratando de su dolor tanto ante la ola de incendios como ante la nueva normativa:

(163) 22 de mayo de 1931, "Exhortación pastoral sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús", BOE de Vich, año 77, 30 de mayo de 1931, núm. 207.

"Formulamos estas breves líneas con el alma transida de dolor ante los horrendos sucesos ocurridos en varias ciudades de España los días 11 y siguientes del corriente mes, y ante las acometidas que en el orden legislativo deberán causar, tarde o temprano, lamentables estragos en lo sagrado de la conciencia católica de los españoles."

Para el prelado los hechos producidos eran no solamente "una vergüenza para el pueblo en que se producen" sino "un espantoso atentado contra nuestro Dios, el Dios de España, Jesucristo, y las cosas divinas de su sacrosanta religión", cuyas terribles consecuencias solo podían ser fruto de "una pasión que no tiene de humano más que lo que en el hombre puede haber de satánico: su odio a las cosas de Dios".

Tras estas palabras recordaba el Dr. GOMA su anterior pastoral: "Los deberes de la hora presente" señalando como al escribirla se consolaba "de que no se hubiera desencadenado la furia demagógica contra nuestra religión, como tantas veces ocurre en los cambios de régimen".

La lección, ahora, había sido rudísima

"...y los poderes constituidos, a los que, desde los comienzos de sus funciones, la Iglesia, noble y generosamente, ha brindado acatamiento y colaboración, deberán apercibirse, -tenemos de ello la seguridad-, de que tales fenómenos no se repiten en el seno de una sociedad sin que se conmuevan sus más hondos cimientos. Esto, que lo dicen la razón y la experiencia de siglos, lo concreta un periódico londinense, comentando los sucesos de aquellos días trágicos, en esta fórmula categorica: "Dejar tranquila e impune a una minoría sin freno, significa la bancarrota del Estado."

Hecha esta advertencia formularia el obispo su protesta por todo lo acaecido recordando, al tiempo, la abnegada reaccion de los religiosos y religiosas de su diocesis cuya actuacion detendria "el brazo airado" de Dios.

Acabada la descripcion y queja por los incendios y profanaciones volveria UOMA su pensamiento a las normas secularizadoras del gobierno provisional, tema que, muy poco prudentemente por su parte, queria enlazar, como hemos visto, con el de la oia incendiaria, en un soterrado interes de poner de manifiesto la persecucion de que, en todos los ordenes, era objeto la Iglesia; bien es verdad que con extrema sutileza aludia a esta cuestion pues simplemente la trataba diciendo que no queria referirse a ella: "Nada decimos de las disposiciones legislativas que afectan a nuestra religion. No es este el momento ni el lugar". Su proposito -anadia- seria el de guardar el deposito de verdades divinas confiado a la Iglesia, mas junto a ello queria reiterar la colaboracion de la Iglesia con el gobierno, siempre, claro era, que este supiera respetar los "derechos de Dios":

"Con el proposito firme de guardar celosamente -mientras aliente Nuestro pecho y ajustandonos en Nuestros actos a toda ley que no se oponga a la Ley de Dios- el sagrado deposito de verdades y de cosas divinas que Nos ha sido confiado, queremos seguir prestando toda la asistencia que de Nuestra insignificancia quepa esperar, a la obra de consolidacion del orden y del fomento del bien social que tiene encomendada el Gobierno de la Republica. Y pedimos otra vez a Dios que nos de a todos, gobernantes y gobernados, la conviccion intima de que solo "la Justicia levanta las naciones", como dice el Sabio, y que es mutilacion capital de la justicia disputarle o negarle a Dios lo que con razon se ha llamado sus "derechos de ciudadania". Dios, fundamento y Autor y norma de toda justicia, tiene en toda humana sociedad derechos mas inalienables que los de cualquiera de sus criaturas, a pesar de la locura de estas de lanzarle, o pretenderlo, de la vida social."

El obispo concluía sus palabras congratulándose de la respuesta de los fieles ante las rogativas que se hacían en las iglesias "para el bien de la religión y de la patria", que, recordamos, había dispuesto en su circular de 29 de abril y reiterado en su extensa pastoral del 10 de mayo.¹⁶⁶

Diametralmente opuesta al juicio de GOMA sobre sus fieles sería la opinión vertida por el boletín eclesiástico de Palencia (cuyo prelado figura entre los que no se referirían por escrito a los hechos), que en 1 de junio publicaría unas *amargas reflexiones* sobre los sucesos de mediados de mayo y el comportamiento de los católicos, con una alusión expresa -lo que el boletín de aquella diócesis se había abstenido de hacer, como hemos apuntado- a lo acontecido en Madrid. En una crónica titulada "Días de dolor", trataba de las "horribles profanaciones de esta luctuosa jornada" y de la necesidad de redoblar las oraciones "por la paz y prosperidad de nuestra desdichada Patria", debiendo los católicos aprender, en una negativa postura no demasiado acorde con las enseñanzas evangélicas, que era preciso "más que nunca, fiar mucho en Dios y desconfiar mucho de los hombres" ya que, ante los incendios y profanaciones producidas, los creyentes se habían escondido, no habiendo sido capaces de defender los valores que eran atacados, por eso el cronista se preguntaba por "aquellas legiones de católicos que aparecían otras veces tan entusiasmados y tan dispuestos al sacrificio" y lamentaban la triste actuación que habían tenido y el escaso valor que habían demostrado:

166) 29 de mayo de 1931, "Exhortación Pastoral Protesta y ruego", BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de mayo de 1931, núm. 664, págs. 410-413.

"Con esta pregunta no queremos echar a nadie en cara la cobardía que vimos todos en los días luctuosos de revolución; reconocemos también que una buena parte de amantes de Jesús prepararon sus ánimos al auxilio y a la defensa; pero no debieron ser muchos, cuando nada pudieron hacer. Se ha dicho por el Gobierno de la República que este no pudo acudir a tantos sitios como a la vez demandaban sus atenciones. ¿No hubiera sido de admirable ejemplaridad que los católicos, tantos como hay en Madrid, por ejemplo, se hubiesen puesto a disposición de las autoridades para combatir a los incendiarios? Al hacernos esta reflexión otras muchas amargas reflexiones embargan nuestro ánimo y saltan a los puntos de la pluma; preferimos que no salgan." (165)

Más lacónico sería el Dr. PLA y DENIEL, obispo de Ávila que, al recordar en la "Circular sobre el acto de desagravios prescrito por su Santidad para la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús...", la realización de tal acto, se limitaba a indicar que en aquellos momentos "especialmente hay motivos para este desagravio por los sacrilegios y actos vandálicos cometidos contra personas y lugares sagrados en distintas ciudades de nuestra España los días 11, 12 y 13 del último mayo". (166)

(165) s.f. "Crónica general. Días de dolor", BOE de Falencia, año 81, 1 de junio de 1931, núm. 11, pag. 366.

(166) 3 de junio de 1931, "Circular sobre el acto de desagravios prescrito por Su Santidad para la fiesta del Sacratísimo Corazón de Jesús en todas las Iglesias", BOE de Ávila, año 42, 8 de junio de 1931, núm. 6, pag. 224.

No dejaría el obispo de León, Dr. ALVAREZ MIRANDA, de referirse a la ola de incendios en la pastoral que con motivo de las disposiciones sobre libertad de cultos y prohibición de la enseñanza de la religión en los centros oficiales, escribió el 13 de junio⁽¹⁶⁷⁾ y en la que uniría sus comentarios sobre las devastaciones cometidas a la exaltación de la labor de las órdenes y congregaciones religiosas.

Para el Dr. ALVAREZ los sacrilegios y crímenes cometidos -de los que indica, aunque no nos conste, que había "protestado con la mayor energía"-⁽¹⁶⁸⁾ eran "fruto del sectarismo anticlerical", "una vergüenza de la civilización y la cultura de los pueblos" y "un negro borrón en la historia de España y del mundo civilizado", que daban lugar a preguntarse por la razón de "ese odio satánico y feroz" contra los religiosos y religiosas, extremo en el que el obispo, sin embargo, no ahondaba, dando como evidente que la labor de religiosos y religiosas sólo podía atraer la gratitud del pueblo y pasando a indicar la necesidad de implorar "que el Altísimo no castigue a España por tan enorme maldad" y a hacer un panegirico de la actuación de aquellos "ciudadanos españoles, establecidos con arreglo a las leyes divinas, eclesiásticas y civiles,⁽¹⁶⁹⁾ consagrados

(167) Sobre esta pastoral ver el capítulo "La cuestión de la enseñanza".

(168) La aludida protesta al no venir publicada en el boletín diocesano debió nacerse privadamente y ahora querría aprovechar el obispo para dejar constancia de ello ante los fieles.

(169) Sobre la polémica del establecimiento de las órdenes religiosas en España, ver el libro de José Manuel CASTELL, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. un estudio jurídico-administrativo (1767-1965)*, Madrid, 1973.

al bien de la Patria; no solo a la propia santificación y salvación de las almas, sino al ejercicio de las diferentes profesiones y ministerios; al estudio, a la instrucción, a la enseñanza y educación de los diversos ramos del saber humano", tareas desempeñadas con humildad "y en general sin tener subvención del estado". Tras estas consideraciones preguntaría el prelado por los que se encontraban entre los bastidores de los ataques perpetrados para dejarnos sin su juicio personal de los hechos al remitirlo a la opinión pública y pidiendo, finalmente, el arrepentimiento de los culpables:

"Ahora bien ¿quien puso la tea incendiaria en las manos de esa muchedumbre enloquecida, que se gozaba en tan espantosa tragedia? ¿quien la embriago en el odio contra personas tan venerables y sagradas, inocentes e incensivas, que pasan la vida haciendo bien? ¿quienes son los inductores? Está en la conciencia de todos, y no podemos ahora extendernos más en cosas tan denigrantes, dolorosas y tristesimas. ¡A cuantas consideraciones se prestan tan lamentables sucesos! Procuremos, pues, desagraviar a la Divina Justicia por tan enormes pecados. Es indudable que la mano de Dios pesara sobre todos o algunos de los culpables, y por esto les exhortamos a que se arrepientan pronto, y hagan penitencia, para que el pecado no pese sobre ellos durante su vida, y puedan alcanzar perdon, como pedimos a Dios."

Hasta finales de junio -aunque no reproducido hasta el 1 de septiembre- no se manifestarían los riales de Alicante sobre los sucesos habidos en aquella diócesis de Orihuela en el mes de mayo, en un documento que venia a sintetizar las devastaciones sufridas en su territorio y por el que, al

(170) 13 de junio de 1931, "La enseñanza religiosa y la libertad de cultos", BOE de León, 15 de junio de 1931, núm. 10, págs. 247-269. (Ver el apéndice núm. 7 del capítulo "La cuestión de la enseñanza").

igual que en su día hicieran los sacerdotes malagueños, querían manifestar a su obispo tanto su repulsa por los incendios y profanaciones habidos en la noche del día 11, como la incondicional adhesión a su persona.⁽¹⁷¹⁾

A la publicación de este documento seguía en el boletín diocesano la respuesta dada por el Dr. IRASTORZA, que hasta mediados de agosto no produciría un escueto y positivo comunicado agradeciendo la protesta formulada por las entidades católicas alicantinas, impartiendo el perdón a los

(171) "Los abajo firmantes, en nombre de todos los miembros de las Asociaciones piadosas y Obras católicas que representan, establecidas en Alicante, tienen el honor de elevar a V.E. Rdaa. el presente escrito para expresar el sentimiento que embarga sus corazones por los sacrilegos atropellos y destrozos impunemente perpetrados por hombres sin conciencia en la tristemente célebre noche del once del pasado Mayo, en que tan ciegamente profanaron y quemaron templos, imágenes y objetos del Culto, y asaltaron y destruyeron la mayoría de los edificios que tenían algún carácter religioso, no respetando ni la propiedad particular de V.E. ni las Comunidades, ni teniendo en consideración el bien público, al que atentaban bárbaramente al dejar reducidas a ruinas las mejores Escuelas de la población, donde tantos miles de niños y niñas recibían cristiana y gratuita educación,

«Por todo ello, Excelentísimo y Reverendísimo Señor, os patentizamos con la energía de que somos capaces, nuestra sincera protesta por tan repugnantes actos, y nuestra profunda veneración y respeto hacia V.E. Rdaa. a quien nos unimos con lazos más estrechos que nunca, en medio del acerbó dolor que latea el corazón de la Iglesia española y más particularmente en esta Diócesis.

«Sirva lo expuesto de lenitivo a la honda pena que aflige vuestro espíritu en estos momentos, y de relativo consuelo al pensar que en Alicante existe un respetable número de católicos que, siempre subordinados a la autoridad jerárquica y sabia dirección de V.E. están dispuestos a defender valientemente, por todos los medios legales, los sagrados derechos de nuestra sacrosanta Religión, y sobre todo a ofrecer actos de amor y reparación al Adorable y ultrajado Corazón de Cristo, y a practicar la caridad que Él enseña, pidiéndole al mismo tiempo el perdón para los infelices culpables.» (Seguían las firmas de los representantes de diversas congregaciones y asociaciones religiosas), 27 de junio de 1931, "Mensaje de protesta y adhesión de las entidades católicas de Alicante a Nuestro Excmo. Prelado", BOE de Orihuela, año 50, 1 de septiembre de 1931, núm. 15, págs. 290-291.

defensores, defendiendo la continuidad del apostolado social y augurando un renacer de la vida cristiana en la diócesis.¹¹⁷²

Más importantes, sin embargo, que todas las manifestaciones de la jerarquía, sería el eco que se produjo en el Vaticano por los sucesos de 11 y 12 de mayo y recogido en declaraciones hechas ante peregrinos españoles por el mismo papa. Para conmemorar el XV centenario del Concilio de Efeso y en XI aniversario de la promulgación de la encíclica "Rerum novarum" se había desplazado a Roma una representación española que, según las reseñas de los distintos boletines eclesásticos, constaba de unas cuatrocientas cincuenta personas "de numerosas Asociaciones y Sindicatos obreros católicos" y era guiada por el obispo auxiliar de

(172) "De auto consuelo ha sido para nuestro espíritu la lectura del fervoroso mensaje, que las Asociaciones y Obras Católica de Alicante nos han dirigido con motivo de los tristes y lamentables sucesos que a todos por igual nos han apenado,

"Para los hijos descarriados, que han manchado sus manos y sus almas con las negruras del incendio y de la culpa, solo sentimos las ansias paternales de que se reconozcan y vuelvan, como el hijo pródigo, a la casa paterna, perdonándoseles de todo corazón.

"La obra del Apostolado social no quedará ahogada en el naufragio; participa del impulso divino de la barca de Pedro y, como rama frondosa del árbol de la iglesia, tiene la savia perenne de la perpetuidad.

"Somos cultivadores de la mies del Señor, y no ha de preocuparnos la recolección, sino la siembra; que nada es el que planta ni el que riega, sino el que la hace crecer y prosperar, Dios Nuestro Señor.

"Los altos testimonios de protesta y adhesión de las falanges católicas alicantinas son índice de lo que nos podemos prometer en la reanudación de la labor de Acción Católica y acrecentamiento de la vida cristiana, para que las bendiciones del Corazón Divino de Cristo Nuestro Redentor se derramen aun sobre aquellos que desconocen sus beneficios, 18 de agosto de 1931. "Contestación de su Excia. a las Asociaciones y Obras Católicas de Alicante", ibid., pags. 292-293.

Valencia; la audiencia concedida por el santo padre fue una de las últimas con motivo de estos aniversarios y fue en su discurso cuando, tras referirse a ellos, quiso mencionar expresamente los sucesos de España:

"No podía faltar España en esta celebración de la 'Rerum Novarum', y los dilectos hijos han hecho bien, muy bien, en venir aportando al Padre Común la nota de su piedad, de su fe y de sus hermosas banderas, algunas de las cuales hacen pensar en los días mismos de la Encíclica de nuestro glorioso predecesor León XIII.

«Mucho es mi contento al convivir con vosotros una conmemoración tan significativa, y mayormente por el hecho que estos hijos han podido consolarse con el Padre tomando parte en las magníficas manifestaciones piadosas en honor y reverencia de la Santa Virgen María, Madre de Dios, que han venido celebrándose en Roma; manifestaciones que casi se podría decir que parecen preparadas en particular manera para los que como ellos tienen tantos motivos para contristarse, temer y rogar por vuestra y nuestra querida España.

«En tanto, por la escasez e incertidumbre de las informaciones, aunque con la certeza de noticias dolorosísimas y de dolorosísimas cosas, ¿qué podrá decir el Padre a sus hijos? Ciertamente gravísima es la responsabilidad de los que han hecho surgir estas lamentables cosas y de los que las han producido; y gravísima también es la responsabilidad de los que las han dejado producir o a tiempo no las han impedido. Además podemos y debemos añadir que las cosas de España ya parecían demasiado amenazadoras y aun comprometidas, amenazadoras de muchos males, sin contar con estas profanaciones, estos sacrilegios, estas violencias contra Dios, contra la Santa Religión y sus ministros.

«Rogamos a Dios para que no quiera responder a estas provocaciones con Su Justicia; para que, por el contrario, se acuerde solamente de Su Misericordia.

«Otra cosa no queremos decir sino esta: que aseguramos a los presentes (y rogamos que lo hagan saber a todos sus compatriotas) que el Romano Pontífice ruega y rogará por España. Así deberán

decirlo todos los presentes hijos nuestros, como lo harán vuestros obispos y vuestros pastores, tan dignamente representados en esta audiencia; y así también todos cuantos amen como vosotros, los aquí reunidos, la antigua fe cristiana y católica, por la que siempre España dio bellísimos ejemplos y testimonios.

«Los caminos de Dios son infinitos, y un consuelo nos queda en todas las tribulaciones: la seguridad de que en medio del peor desenfreno de las pasiones humanas y de las humanas violencias, las cosas quedan siempre en las manos de Dios. Cuando llega el momento en que su providencia se hace sentir todas las cosas le obedecen a Él y no a los hombres; y para consuelo de todos, de la mano de Dios no hay que esperar sino el bien.

«Fasemos ahora a daros aquella bendición apostólica que habéis venido a pedir, a todos y cada uno y a todos y cada una. Bendecimos también con vosotros a vuestras organizaciones, con la esperanza de que pronto puedan refloracer no sólo en bien de la Religión, sino también para provecho de vuestro país, puesto que si hay otros bienes y otras cosas importantes, ninguna lo es más importante ni tiene tan grande y honda influencia sobre todos los demás intereses y cosas como la Religión. Os encargo, finalmente, a todos vosotros de llevar a vuestras familias, a vuestros compañeros de trabajo y de fe, ésta nuestra bendición, y la seguridad de que el Padre de todos los fieles ruega por España a Dios Nuestro Señor.» (172)

(173) Este discurso, que hemos reproducido íntegro, fue publicado, entre otros, en los siguientes boletines eclesiales:

BDE de Grinuela, año 50, 15 de junio de 1931, num. 10, págs. 206-208.
 BDE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de junio de 1931, num. 685, págs. 458-460.
 BDE de León, 30 de junio de 1931, num. 11, págs. 286-288.
 BDE de Moncofeco, año 74, 6 de julio de 1931, num. 14, págs. 115-114.
 BDE de Oviedo, año 67, 15 de julio de 1931, num. 14, págs. 201-203.
 BDE de Málaga, 15 de septiembre de 1931, num. 10, pag. 381.

6.2. La continuación de la violencia.

El boletín eclesiástico de la diócesis de Mallorca únicamente alude a un atentado, aunque este se produjo sin vinculación alguna con la ola de incendios y saqueos de los días 11 a 13 de mayo. No cabe deducir del escrito que inmediatamente elevó el prelado Dr. Jose MIRALLES SBERT al gobernador civil en qué consistió tal ataque, que tuvo lugar ya en el mes de junio, siendo de destacar en este caso la rápida contestación de la primera autoridad local lamentando lo sucedido, si bien no tanto por la afrenta infligida a la Iglesia como por interés en defender la buena imagen del régimen republicano.⁽¹⁷⁴⁾

(174) "Tengo el profundo disgusto de dirigirme a V.I. para protestar, como Jefe espiritual de Mallorca del atentado cometido esta noche contra la Iglesia de Montesión de Palma, lastimando gravemente los sentimientos religiosos de mis diocesanos en ora para ellos tan señalado como la fiesta principal del Sacratísimo Corazón de Jesús. A la vez como propietario del edificio en virtud de Real Orden de Hacienda de 10 de junio de 1916, denuncio a V.I. el hecho criminal y le suplico que ordene la busca y captura del autor de la salvajada, a fin de demandar para el los oportunos castigo y reparación".

"Recibo su atenta de 12 de los corrientes gano me cuenta del vandálico atentado contra la Iglesia de Montesión, hecho del que tuve conocimiento momentos después de realizarse. Soy el primero en lamentar esos actos, se realicen contra una Iglesia o un edificio particular, más que por la alarma que producen, y algunas veces daños personales y materiales, por la incultura y barbarie que supone en sus autores, que ni son ni pueden ser republicanos, ya que la República supone paz y progreso y orden y mucho respeto, pudiendo tener V.E. la seguridad de que se hará cuanto se pueda para descubrir al autor o autores del hecho, pues en ello está tan interesado este Gobierno, como pueda estarlo ese Obispado". 12 y 16 de junio, "Dos comunicaciones". BGE de Mallorca, año 71, 22 de junio de 1931, num. 7, pag. 162.

No sería, sin embargo, Mallorca la única diócesis que, pasado el embate del mes de mayo, sufriría agresiones a los bienes eclesiásticos, tal como corroboran las noticias aparecidas en la prensa a lo largo de 1931, como continuación de las reseñas que se habían ido publicando durante aquel mes⁽¹⁷⁵⁾ y de las que nos limitamos a recoger,

(175) En efecto, los periódicos consultados no dejaron de tratar, como es obvio, la cuestión de la ola de incendios. Entre las noticias dadas y los comentarios realizados creemos interesante destacar la alusión de "El Sol" a las manifestaciones hechas a través de la radio por el Dr. IRURITA desmintiendo el rumor que corría por Barcelona y que le imputaba haber dado la orden de desalojo de los conventos religiosos añadiendo, además, la versión de que "seguramente los elementos perturbadores" habían suplantado su nombre para dar esta noticia. (Tal como VIDAL relataba a PACELLI en su ya mencionada carta de 27 de junio, también en Tarragona había ruidido este tipo de alarma pretendiéndose por varios colegios y conventos a desalojar e incluso a sacar muebles, lo cual, según expresión de la Guardia Civil y de la Policía, había contribuido a aumentar la intranquilidad, frente a la comprensión del cardenal por la zozobra que sus ocupantes debieron sentir, pese a la cual el sólo había autorizado a dos o tres monjas viejas o enfermas el abandono de la clausura con obligación de regresar al convento al día siguiente y no permitiendo expresamente la evacuación de los seminaristas). La actuación de estos "elementos perturbadores" era corroborada por el mismo gobernador civil de Barcelona, quien informó que la alarma producida en esa provincia por la posible quema de edificios religiosos era obra de "un plan preconcebido" que hizo ruidir la consigna de que en la tarde del día 13 iban a ser asaltados los conventos; todo, empero, había quedado sin efecto por las medidas adoptadas, con las que se pretendía continuar hasta lograr la detención de los autores del plan para intranquilizar a la población. ("El Sol", 15 de mayo de 1931).

Otra referencia interesante es el comentario que firmado por R.M. TENREIRO publicaría el mismo periódico pocos días después y cuyo tema venía motivado, precisamente, por la reciente ola de incendios tomando como pie una supuesta actitud de un insigne católico; bajo el título "La mayor blasfemia" se refería el comentarista a las frases atribuidas al duque de Medinaceli manifestando que si la imagen de Cristo que ostentaba su nombre hubiera sufrido alguna ofensa "estaba dispuesto, para vengarla, a gastar hasta el último céntimo de sus caudales". Si bien el autor negaba la atribución de estas palabras no dejaba de tomarlas, como decimos, como excusa para resaltar que estaban llenas de "esa barbarie anticristiana que suele ser representativa del espíritu de muchos de los que entre nosotros se proclaman piadosos, espíritu que ha contribuido no poco a la gestación de las violencias que todos lamentamos...", indicando que era en realidad una blasfemia la suposición de que pudiera vengarse a la divinidad y resultaba pagano entender que podía ofender a una imagen; había su profanación, sí, lo cual hería los sentimientos católicos. Pero nada más, pues atribuir cualquier otro sentido enlazaba con la costumbre de cubrir de joyas las imágenes "mientras quedan sin atender las necesidades de tantos indigentes, creando así auros de hostilidad entre los pobres y la

como simple muestra de lo que indicamos, las dadas por uno de los dos periódicos que, como complemento de nuestro

Iglesia que siempre debería haber sido su amparo y defensa". Por ello la única "vendetta" cristiana que había ante los recientes sucesos era "que examinemos la culpa que en lo hecho puede cabernos a todos... aun a los que se tengan por mas alejados de los sucesos espantosos" ("El Sol", 20 de mayo de 1931). También tendría su apoyatura en los incendios el artículo que sobre "Lo religioso, lo irreligioso y lo antirreligioso" publicaría en este periódico UNAMUNO, criticando duramente aquellas jornadas que demostraban una situación de misteria general y de ignorancia por parte de los españoles de que deseaban realmente de la república ("El Sol", 4 de junio de 1931, ver apéndice núm. 20).

Igualmente relacionadas con los incendios del 11 y 12 de mayo eran las noticias y comentarios publicados por "El Debate" sobre la detención de diecinueve incendiarios en Lora del Río (Sevilla) el 22 de mayo; a tales efectos se había desplazado un juez especial para investigar la quema de templos en dicha localidad, investigación que tuvo como consecuencia la detención citada, que provocó un amotinamiento de las mujeres del pueblo y la inmediata carga de la Guardia Civil que, a su vez, fue causa de la declaración de huelga general, por lo que tuvo que ser reforzada por guardias de Sevilla, restableciéndose el orden. Una comisión de los huelguistas visitó al capitán general, que no había admitido su actitud ordenando la reanudación del trabajo ("El Debate", 23 de mayo de 1931). La conducta de dicho capitán general sería alabada al día siguiente por el periódico, para el que una cosa era "escuchar las peticiones de los ciudadanos y otra pactar con gentes entregadas al motin y colocadas desde el primer momento en rebeldía" ("El Debate", 24 de mayo de 1931). (La suspensión de este periódico y de "ABC" desde el 11 al 20 de mayo, a consecuencia de los disturbios -y que dicho diario calificó de "maniobra del gobierno" para privar a la derecha de dos importantes órganos de expresión en vísperas de las elecciones a Cortes constituyentes, según el editorial publicado el mismo día 20- impidió que pudiera pronunciarse o dar noticias sobre los hechos).

Se debe destacar también las noticias dadas, tanto por la prensa como por los boletines diocesanos, relativas a la reanudación de la normalidad tras la oía de incendios. Así, entre ellas, la publicada por "El Debate" el 26 de mayo y que trataba de la renovación de las clases en los colegios de primera enseñanza que tenían en Madrid los "Hermanos de las Escuelas Cristianas", que impartían enseñanza gratuita a cientos de niños, cuyos padres habían escrito al gobierno para pedir garantías para los religiosos, los niños y los edificios, por lo que los colegios habían quedado custodiados por la Guardia Civil; la noticia añadía que de los dos colegios de dichos religiosos uno llevaba instalado cuarenta y dos años en la barriada de Vallehermoso y el otro no había podido abrir sus puertas al haber quedado totalmente destruido ("El Debate", 26 de mayo de 1931).

El boletín diocesano de Palencia daba una noticia de similar índole en su "Crónica general", informando que los "Hermanos de la Doctrina Cristiana", que habían perdido el "Colegio de Maravillas", no tenían inconveniente en reanudar sus clases "donde puedan, a fin de que cuatro mil seiscientos niños no queden

análisis, hemos consultado; toda vez que, en relación con estos hechos, es de destacar que aunque algunos boletines

sin estudio, con tal de que el Gobierno les garantice la seguridad de sus escolares", para lo cual no pedían garantía ni protección, ya que solo buscaban "el bien de sus ovejas, sin huir ante la presencia del lobo" (s.f. "Crónica General.- ¡Siempre nobles!", BOE de Palencia, año 81, 1 de junio de 1931, núm. 11, págs. 367).

Más, junto a estas reseñas no dejaban de darse otras de mayor singularidad y que revelaban el deseo de un sector de la población de vincular los hechos a una posible y previa provocación por parte de elementos conservadores que, en prevención del sesgo que pudiera tomar la República o simplemente para alzarla contra ella, podían haber procedido a hacer acopio de armas. Así lo revela la noticia dada por "El Debate" en su sección "Lo del día" en la que, bajo el título "¡ya es demasiado!", daba cuenta del registro efectuado por la policía en el "Instituto Católico de Artes e Industrias", en busca de armas y de un paso secreto entre sus talleres y el resto del edificio, que había sido destruido por el incendio; aunque el registro se había efectuado "en cumplimiento de órdenes superiores", el periódico, usando de una cierta ironía ante la pasividad que se achacaba al poder ejecutivo por no haber reprimido los incendios, expresaba su "sincera creencia de que el Gobierno ignora este nuevo acto añadido a la tragicomedia de la quema de colegios y conventos", sobre la que había las más diversas versiones rechazadas de plano por el diario, que apuntaba su propia versión de los responsables:

"...obra de la confabulación monárquico-romunista, de los religiosos mismos, etc., etc. ¡ya es demasiado! De esas monstruosas confabulaciones no se ha presentado, no se presentará, ni prueba, ni indicio de ella. Se puede ser enemigo de la República y no ser incendiario, ¿no es así? Y se puede ser, a la vez, antimonárquico y antirreligioso e incendiario; así lo prueban las detenciones practicadas".

No pretendía "El Debate" convencer de todo esto al Gobierno -"porque lo sabe tan bien y mejor que nosotros"- pero sí quería exaltar:

"...la prudencia con que hombres que han visto arder sus casas, sus aulas, sus laboratorios, el fruto de treinta años de investigaciones y trabajos, han soportado en silencio la calumnia vil que a ellos les acusa como incendiarios de las obras de su vida, que son su vida misma".

Frente a ello reaccionaba el periódico pidiendo a los poderes públicos que intervinieran para que no se realizaran actuaciones policiales como la que se describía en la noticia:

"Y ya la calumnia se ha aireado bastante, y la novela de las armas y los explosivos ha corrido ya por las porterías y los corrillos de pobre gente inculta. ¡ya es bastante! El Gobierno, cuya responsabilidad por no haber evitado muchos evitables incendios es notoria, debe intervenir, en prohibición de que aun se lleve adelante la comedia, inútil, de otra parte; porque una porción del pueblo ya se dejó engañar, y no es necesario embaucarlo más! Y las gentes sensatas, a quienes no se ha podido ni se podrá engañar, aunque

diocesanos se refirieran esporadicamente a ellos, como veremos, curiosamente no les prestaron la misma atención que les prestaría la prensa a lo largo de 1931, 1932 y 1933.

Así daría "El Sol" la noticia del hallazgo de once cartuchos de dinamita en la parroquia de Abando (Bilbao) en un momento en que, por ser víspera de "Corpus" el templo se encontraba lleno, por lo que después del descubrimiento había quedado la guardia de seguridad en las cercanías de la iglesia.¹¹⁷⁶

Pasado un mes el mismo periódico daría la noticia de que, a consecuencia de los rumores de que los jesuitas habían sido autorizados para regresar a su residencia y que los capuchinos no lo habían sido para reintegrarse a su convento, se celebró en La Coruña, en señal de protesta, un mitin organizado por la "Federación Obrera", adoptándose la conclusión de que mientras las Cortes no resolvieran sobre el particular se respetase el Concordato, y en consecuencia fueran expulsadas del territorio nacional "las órdenes religiosas cuya residencia no este expreamente autorizada en dicho Concordato."¹¹⁷⁷

alguna mano mercenaria o malintencionada esconde un puñado de armas entre ruinas de libre acceso durante diez días, van a dirigir muy arriba sus censuras contra estas alianzas de la crueldad y la dilatación". ("El Debate", 22 de mayo de 1931).

En relación con el estado de opinión relativo al acopio de armas en edificios de la Iglesia, ver más adelante la noticia de "El Sol" sobre el incendio de un convento de los capuchinos en la Coruña, así como, en cuanto a la pasividad del Gobierno, el ya citado discurso de MAURA en el apéndice núm. 16.

(176) "El Sol", 4 de junio de 1931.

(177) Ver el apéndice sobre las órdenes y congregaciones religiosas.

A la salida del mitin, unos cuantos de sus asistentes habían intentado asaltar y quemar la residencia de los jesuitas siendo contenidos por la Guardia Civil de Seguridad; sin embargo, por la noche fue incendiado el convento abandonado de los padres capuchinos, (pese a la intervención de la Guardia Civil que produjo varios heridos, por haber dado lugar a un tiroteo cruzado) propagándose el incendio a las casas colindantes con patéticas escenas en el vecindario que fueron causa de que los ánimos se enardecieran y, así, a media noche la población de la zona se dirigiera, una vez contemplada la culminación y fin del siniestro, hacia la ciudad vieja con intención de incendiar más conventos, lo que determinó que las autoridades ordenaran la intervención del ejército mientras la Guardia Civil procedía a acordonar la residencia de los jesuitas y a patrullar por las calles, lo que produjo la vuelta a la normalidad. Hay que señalar que en la descripción del incendio el periódico hacía constar, aludiendo al convento, que "en su interior había seguramente numerosos proyectiles, porque a poco de empezar el fuego se sucedieron numerosas explosiones, como si se quemara una traca", noticia que iba en línea con los calumniosos rumores denunciados por "El Debate", el día 22 de mayo.⁽¹⁷⁸⁾

(178) "El Sol", 3 de julio de 1931. (A la denuncia de "El Debate" hemos aludido en los últimos párrafos de la nota 168) sobre el incendio del convento de los padres capuchinos publicó el boletín diocesano de Palencia en su sección "Crónica general" un comentario titulado "¡Lo que nos faltaba!" en el que se refería a lo que calificaba de sectarismo del ayuntamiento de La Coruña por haber permanecido inactivo durante la noche de 2 de julio mientras las turbas incendiaban el convento, enviando a los bomberos sólo cuando se vió peligrar las casas vecinas; al cabo de los meses el ayuntamiento venía a reclamar a los religiosos una exacción municipal -suponemos, aunque el boletín no lo incluye, que sería por los trabajos de sofocar el incendio- ya que ante esta noticia el cronista comentaba que era "el caso más peregrino que registrará la historia contemporánea de la sensibilidad moral de los representantes de un pueblo" BGE de Palencia, año 61, 1 de diciembre de 1931, núm. 25, págs. 769-770).

Otras noticias publicadas a lo largo del año son, además, buena prueba de que los ánimos provocadores de hechos violentos, de mayor o menor cuantía, contra la Iglesia seguirían existiendo durante toda la etapa del primer bienio republicano. Así, la noticia sobre explosión de petardos en "Los Luises" mientras se celebraba la misa en vísperas de la aprobación del artículo 26 de la Constitución relativo a las órdenes religiosas, y que acabaría determinando la expulsión de la Compañía de Jesús,⁽¹⁷⁹⁾ la relativa a la pintura de rojo de la estatua del Corazón de Jesús existente en el cerro de San Cristóbal de Almería, hecho realizado por la "Juventud Republicana" también por aquellas fechas y que provocó la protesta de la población y la prensa;⁽¹⁸⁰⁾ el asalto a la capilla de Ubias (Santander) y la profanación de sus imágenes, acción atribuida a campesinos de la zona, que inmediatamente fueron detenidos.⁽¹⁸¹⁾

(179) "El Sol", 14 de octubre de 1931. Ver sobre este último extremo, el capítulo relativo a la Constitución y el apéndice sobre las órdenes y congregaciones religiosas.

(180) "El Sol", 19 de octubre de 1931.

(181) "El Sol", 21 de octubre de 1931.

7. La expulsión del Dr. Mateo Múgica Urrestarazu, obispo de Vitoria.

"Todavía no se habían apagado los rescoldos de los incendios [de mayo de 1931] cuando se produce un nuevo incidente. El ministro de la Gobernación había recibido información del gobernador de Alava de que el obispo de Vitoria, con Mateo Múgica, de claras simpatías monárquicas⁽¹⁶²⁾ y con jurisdicción sobre Guipúzcoa y Vizcaya, preparaba una visita pastoral y como consecuencia de la misma se temían, en medios gubernamentales, posibles alteraciones del orden público. Ante la negativa del obispo a aplazar su recorrido pastoral, Maura ordenó su expulsión de España, alegando el carácter eminentemente político que daba el prelado a sus visitas a las parroquias de su diócesis."⁽¹⁶³⁾

(162) Ver a este respecto lo indicado en la nota 21. A ello añade ARBELLOA que la intransigencia de Múgica y su amistad con el ex rey le habían ganado la antipatía de la minoría republicana y laica del País Vasco y también fuera de él, dadas sus posiciones anteriores a la República. Ver: ARBELLOA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia española (1931)*, Barcelona, 1976, pag. 12.

(163) CASTELLÓ, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurisdiccionario-administrativo (1767-1965)*, Madrid, 1973, pag. 306.

Esta versión de Castells que, ante la negativa del obispo a secundar las ordenes del gobierno, nos da como razón de su expulsión la posibilidad de alteraciones del orden público, y como alegación de MAURA para fundamentar su decisión la del carácter político de las visitas del prelado a sus parroquias, es menos dura que la que da Turió de Lara, autor que, tras afirmar que el Dr. MUGICA "se mostraba muy decidido a ejercer una acción política cerca de sus feligreses", añade que su visita pastoral a Bilbao iba a dar lugar, no solo a meras y posibles alteraciones del orden público, sino a una concreta "manifestación política".¹¹⁸⁴ En la opinión de esta posible actuación política del prelado como causa de su exilio abunda también, por su parte Cuenca Toribio que, tras señalar que la expulsión del obispo se hizo bajo razones de orden público, añade que "en puridad [fue] por alentar la rebeldía de sus feligreses contra el sistema".¹¹⁸⁵ Arbeloa, por último, y basándose probablen-

(184) TURIÓ DE LARA, Manuel, *La España del siglo XX*, II, Barcelona, 1974, pág. 308.

(185) CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia y Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid, 1985, pág. 29. Del fragmento de la versión de los hechos por parte del propio MAURA que recoge el autor en la nota 14 de esta página no es posible deducir la verdadera acusación que este formulaba contra el obispo, por lo que es preciso que nos retiremos íntegramente a ella, no sin advertir que, pese a su declaración de que al efectuar su relato de los enfrentamientos que sufrió con dos prelados (MUGICA y SEGURA), este sería "fidelísimo", no cabe duda que MAURA comete crasos errores al describir personas y fechas en lo que se refiere a la actuación del prelado (ver dicha versión en el apéndice 21), dicho lo cual pasemos al relato que efectúa sobre el caso del obispo de Vitoria y del que se desprende que la razón de la expulsión sería apoyada tanto en los posibles "manejos políticos" que tenían lugar en el obispado, como en el temor de que una prevista visita pastoral del Dr. MUGICA a Bilbao provocara una grave alteración del orden público consecuencia, en última instancia, de posibles enfrentamientos políticos, por lo que, si no acceder a suspender su visita, el prelado fue invitado a pasar la frontera:

Así, refiriéndose al gobernador de Alava, MARTÍNEZ ARAGON, dice MAURA:

"En varias ocasiones había llamado mi atención sobre los manejos que, al parecer, se practicaban en el palacio episcopal, donde entraban y salían a todas horas los más significados miembros de los partidos nacionalistas vascos

te en la carta que el nuncio IEDESCHINI escribiera a AZAÑA

y carlista, que, por aquel entonces, eran a cual más enemigo de la República. Le tenía yo muy recomendado que sin disminuir la vigilancia extremase los miramientos con la persona y la autoridad del obispo, para evitar que en provincia tan católica como la de Alava tuviésemos que intervenir en forma violenta en frente de la jerarquía eclesiástica.

Así lo procuraba Martínez Aragón; mas no tenían los manejos políticos en el obispado, sino que, por el contrario, resultaba ya evidente que en él se tramaba una conspiración de tipo político que podía provocar un gravísimo conflicto en la región vasca.

Un sábado por la mañana, el gobernador me anunció que el obispo había decidido salir al siguiente día para "girar una visita pastoral" a Bilbao, donde los carlistas y nacionalistas le esperarían con banderas y emblemas, preparándose una gran manifestación en las calles. Por su parte, el gobernador de Vizcaya me dijo que los elementos obreros y republicanos, al conocer el plan "religioso" que se tramaba, le habían anunciado que no estaban dispuestos a tolerar en silencio esa clase de manifestaciones y que estarían en la calle para repelerla. En resumen, la perspectiva de un grave conflicto de orden público a la vista, al mes y medio del advenimiento de la República y en una región que, por verdadero milagro, había permanecido hasta entonces tranquila en el aspecto político.

Ordene al gobernador que se entrevistase en mi nombre con el obispo y le manifestase al deseo y al consejo de que suspendiese *sine die* la visita pastoral anunciada, para evitar males mayores.

Cumplió Martínez Aragón al encargo, pero encontró a monseñor Múgica totalmente decidido a realizar el viaje costase lo que costase. Según me explicó, se trataba de un prelado sumamente energético y tenaz, impulsivo en extremo y de espíritu intransigente.

...

Volvió el gobernador a visitar al obispo, reiterándole en mi nombre la orden, esta vez conminatoria, del aplazamiento de la visita pastoral, advirtiéndole del daño que causaría a la Iglesia y al orden público si, por pretender pasar por encima de mi decisión, me obligaba a tomar medidas radicales, que, sin rodeos, le dijo estaba decidido a adoptar.

Lejos de ceder, el prelado siguió mostrando su firme voluntad de realizar el viaje, alegando que no podía dar a los fieles que le esperaban la sensación de miedo o de cobardía ante un requerimiento amenazador, aunque partiese de un ministro.

Ya no era prudente vacilar. Sin más diálogo y como orden definitiva, dispuse que el gobernador notificase al obispo que, sin demora y en su compañía debía de pasar la frontera de Francia por Irún, en el curso de la tarde o de la noche. Le encargué, además, que le advirtiera de que el regreso a España y el acceso a su silla episcopal le estaba vedado hasta nuevo aviso.

El obispo, haciendo constar su enérgica protesta por el atropello, se dispuso a obedecer, asegurando que ante la "fuerza mayor" su prestigio no sufriría y que sus feligreses serían los encargados de sancionar su conducta, tan pronto como se enterasen". MAURA, Miguel. *Así Cayó Alfonso XIII*, Barcelona, 1966, págs. 294-295.

ya en julio de 1932 y a la que mas adelante aludiremos, indica que la acusación "de no se que extrañas maquinaciones y complacencias subversivas" del obispo "no pudieron probarse nunca", añadiendo que en la decisión tomada en solitario por MAURA era "muy posible... (que) influyera la ley de la compensación" ante su intento de presentar la dimisión por lo impopular de la actuación del gobierno en los incendios de 11 y 12 de mayo, intento del que el mismo nuncio le había disuadido; a ello añade el autor que este "destierro aparatoso del obispo en rechas tan delicadas, encono aun mas la alertada opinión general del País Vasco, distanciada, en su mayoría, del gobierno centralista y laicista de Madrid" y que este mal paso del ministro católico de gobernación fue considerado como una provocación por la mayoría católica vasca y no vasca, que encontro sin demasiado esfuerzo, un nuevo motivo de oposición al régimen. (186)

(186) Este, en efecto, no informó de la medida ni al resto del gobierno ni al propio ALCALÁ ZAMORA, que desaprobó su decisión, una vez se la comunicó al día siguiente, MAURA, Miguel, Op. cit. págs. 296-297.

(187) ARBELLOA, Victor Manuel, *ibidem*, ya expusimos en la nota 136 como para CUENCA TORIBIO el posible "entente" entre el régimen republicano y la Iglesia quedo truncado tras los incendios de mayo, agravándose considerablemente las tensiones entre una y otra potestad y "... adentrándose unos y otros en un pugilato de torpezas y maximalismos...", CUENCA TORIBIO, Op. cit. pag. 26. ARBELLOA y CASTELLS destacan por su parte, y desde el prisma de la Iglesia, como la expulsión del Dr. MUGICA vino a sumarse a todos los hechos que venian produciéndose contra ella y fue causa de que, ante ellos, el Vaticano modificara su actitud inicial ante el nuevo régimen, siendo la inmediata consecuencia de este cambio en la diplomacia de la Santa Sede que el 31 de mayo denegara el "placet" al embajador propuesto ante ella por el gobierno español, D. Luis DE ZULUETA (ARBELLOA, *ibidem*, CASTELLS, *ibidem*.), si bien la opinión publica generalizada era que el Vaticano habia rechazado a Zulueta por su carácter liberal y agnóstico. (ARBELLOA, op. cit. págs. 19 y 20 y *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pág. 64, nota 5. En esta última obra se trata de la insistencia del gobierno en su propuesta sobre ZULUETA al considerar la conveniencia para ambas partes del restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, así como del viaje que para exponer la situación religiosa, social y

De esta forma , y por disposición expresa de MAURA, el 17 de mayo era exilado el obispo, ante lo cual el vicario

política en España -uno de cuyos puntos era la difícil permanencia del nuncio al no contar el gobierno con embajador ante el Vaticano- realizaron a Roma, por iniciativa de TEDESCHINI y del cardenal de Tarragona, los doctores CARRERAS y VILAPLANA a finales de octubre de 1931. El nombramiento de ZULUETA como ministro de Estado en el gobierno constituido el 15 de diciembre hizo descartar la propuesta de que representara a España ante la Santa Sede, no siendo designado el primer embajador de la República ante ella hasta febrero de 1934, cargo que recayó en Leandro PITA ROMERO, *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 293-294; 428-429 y II, 29-31; 44-45; 59, nota 25; 70-72 y 176). Frente a la aludida opinión del rechazo del Vaticano por el laicismo de ZULUETA y aparte del sorprendido comentario de Fernando DE LOS RÍOS publicado por "La Voz" de Madrid, del día 31 de mayo de 1931 y recogido en la obra citada de ARBELLOA y en la nota indicada de *Esglesia i Estat durant la segona...*, la prensa no dejó de manifestar también su sorpresa por la actitud de la Santa Sede, como lo corrobora este comentario de "El Sol" describiendo la personalidad del propuesto como embajador en términos muy dispares a como era visto por la Iglesia (esta, no obstante, comenzó a matizar su postura según se desprende del posterior apoyo del nuncio y de VIDAL al nombramiento, dada la insistencia del gobierno, y del análisis sobre esta personalidad que se contiene en el informe que los doctores CARRERAS y VILAPLANA presentaron a la Secretaría de Estado del Vaticano). No deja de ser relevante, por otra parte, que en la noticia que precedía al comentario de "El Sol" enlazara el periódico los entonces rumores del rechazo del Vaticano con la del envío de una supuesta nota oficiosa de la Santa Sede al presidente del gobierno "referente a las violencias y ofensas llevadas a cabo contra el clero", noticia respecto a la que ALCALA ZAMORA negaba tal remisión a pesar de que, indicaba el periódico, "en los círculos del Vaticano... se confirma que la citada nota ha sido enviada" ("El Sol", 23 de mayo de 1931). Sobre este hecho, que parece enlazar también el cambio de la diplomacia del Vaticano con la negación del "placet", sólo hemos encontrado la alusión a "las protestas que la Santa Sede ha hecho por conducto mío" que hace Tedeschini en la carta que envió a VIDAL el 10 de julio de 1931 (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pág. 119) y la noticia, ya aludida en la nota 108, que dió "El Debate" de una visita del nuncio a ALCALA ZAMORA con posterioridad a las fechas a que se refiere "El Sol" (el 29 de mayo) en la que le entregó una "pequeña nota" sobre los últimos decretos.

"LA DIPLOMACIA DE LA REPUBLICA

DON LUIS DE ZULUETA Y LA SUTILEZA VATICANA

«El primer intento de relación directa entre la República española y el Vaticano ha sido poco afortunado. La Ciudad Vaticana, diminuta entre las mas pequeñas por su extensión geográfica, superlativamente grande como Estado por la ecuménica amplitud de sus dominios espirituales, ha negado su "placet" al nombramiento de D. Luis de Zulueta para embajador de España en los territorios del Papado.

general de la diócesis, Dr. Justo ECHEGUREN, publicó una nota en el boletín eclesiástico dando su propia versión de

«Preciso es confesar que el Gobierno español no ha obrado con la cautela deseable -lo mismo en este caso que en el D. Gabriel Alomar- lanzando ilustres nombres a la publicidad sin la previa obtención del citado "placet". ¿No ha podido influir, especialmente en cuanto se refiere a la negativa del Estado Pontificio, la omisión, en sí misma, de aquellas previas deliberaciones, enderezadas a disipar algunos recelos?

«Por su parte, la diplomacia vaticana no parece tampoco haber sido demasiado sutil en la ocasión presente. Quizá por deficiente o tendenciosa información, carente de los matices necesarios, ha puesto el veto a un español calificado como poco para entenderse digna y prudentemente con la Curia.

«D. Luis de Zulueta se distingue entre nuestros hombres de letras por la unión religiosa con que se acerca a toda clase de problemas. Caracterízase y se hace un sitio de excepción en el pensamiento nacional por el acento evangélico de sus exhortaciones, reprobaciones o dictámenes. Su voz se alza siempre en las disputas como la del piadoso; es decir, la del hombre cuyo corazón se asoma asiduamente a un paisaje donde se unen puro amor y perfecta justicia. Zulueta es un intelectual, y son muchas las demarcaciones de la conciencia humana que han tentado a su penetrante entendimiento. En todas ellas ha conseguido afirmar su originalidad de pensador y suscitar costosos pensamientos. Dada su contextura espiritual peculiarísima, no pudo sustraerse al estudio de los problemas religiosos, en cuya trama delicada, hecha de temporales intereses e imponderables suprahistóricos, se agotó horas y horas de su vida.

«Torpes, incompetentes, inhabiles representantes diplomáticos, faltos de una especial preparación, ha solido enviar al Vaticano la Monarquía destronada, con deplorables resultados. Valía la pena, desde el punto de vista del propio Estado Pontificio, de haber ensayado un cambio de maneras políticas con la admisión en la Embajada vaticana de un hombre experto en materia eclesiástica y religiosa, con hábitos mentales que hacen de él una especie de cardenal civil.

«Creemos que pierden con el veto la Ciudad Vaticana y la República, D. Luis de Zulueta, no. A él le quedan innumerables puestos y ocasiones en que prestar a su patria servicios memorables.» ("El Sol", 27 de mayo de 1931).

Hay que señalar, sin embargo y por último que frente a esta actitud de "El Sol" se situaba la opuesta de "El Debate", periódico que ante el discurso pronunciado por ZULUETA el 28 de agosto de 1931 en las Cortes y en el que consideraba los artículos antirreligiosos del proyecto de constitución como una consecuencia de la actitud de la Iglesia durante la dictadura de PRIMO DE RIVERA, no se privaba de calificar al diputado independiente por Badajoz como "el más neto enemigo de la Iglesia" y un "perfecto tipo de hereje" ("El Debate", 29 de agosto de 1931, citado en *Esglesia i Estat durant la segona...*, pág. 64, nota 5).

los acontecimientos y transcribiendo la dada a conocer por la autoridad gubernamental para justificar la actuación seguida. En esta nota el vicario negaba rotundamente cualquier matiz político en las visitas pastorales del obispo -no dejando de resaltar que solo había efectuado una desde el advenimiento de la República- así como que tuviera previsto -en contra de la versión de MAURA que ha quedado recogida a pie de texto- el efectuar una visita pastoral a Bilbao; también daba cuenta de las gestiones efectuadas por el mismo ante el ministro de la Gobernación, que incluían la presentación de un alegato tendente a demostrar que lo que entonces se desencadenaba contra el prelado, el cual había acatado sinceramente el nuevo régimen, era obra de la hostilidad de ciertos elementos debida a las actuaciones pastorales que apuntaba, no habiéndose probado ningún hecho que pudiera demostrar que el obispo hubiera actuado contra los intereses de la República.⁽¹⁸⁸⁾

(188) "Desde la noche del diecisiete de este mes esta huérfana la diócesis de Vitoria -y nosotros los hijos de ella- de la amable presencia, aunque no de la venerada autoridad y paternal cariño, de su celosísimo y queridísimo Padre y Pastor el Excmo. Sr. D. Mateo Mugica, Obispo dignísimo nuestro. Una orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, que le era transmitida tres cuartos de hora antes de la fijada para la partida, le obligaba a ausentarse temporalmente de su diócesis muy amada y a traspasar la frontera de la Patria.

«Al verie marchar con rostro apacible y bondadoso, repleto manifiesto de la paz y serenidad de que gozaba entonces su alma buena y del todo inocente de cuanto se le imputaba, en la nuestra, partida por el dolor y la indignación, resonaba potente, presagiando consuelos y esperanzas, el eco dulce de aquellas divinas palabras: *Ibant gaudentes a conspectu concilii quoniam digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati*... *Si me persecuti sunt et vos persequentur*... *Confridite, ego vici mundum*».

«Se pretendió justificar aquella orden dando al día siguiente a la publicidad esta nota:

Al tiempo que el boletín eclesiástico de Vitoria daba esta noticia hacia lo propio el de Palencia, perteneciente

«Con reiteración viene el ministro, directamente y por medio de los gobernadores, requiriendo al señor obispo de Vitoria para que se abstuviera de dar a sus visitas a las ciudades de su diócesis un carácter marcadamente político, tan extraño a su ministerio como peligroso para la paz pública, que el ministro incumbe garantizar.

«No sólo no fueron atendidos estos requerimientos, sino que cada día aumentaba la intromisión del prelado en el terreno vedado de la propaganda política, en tal forma que llegó en estos últimos días a ser un serio peligro para la paz espiritual y material de la región vasca. El riesgo de graves perturbaciones se ofrecía inminente para la mañana del lunes, en términos que el ministro no cree oportuno detallar.

«No ha querido, por lo visto, este señor prelado seguir el ejemplo de otros altos dignatarios de la Iglesia española, que con perfecta comprensión de las obligaciones que el nuevo estado de cosas impone, han extremado su celo para lograr de las conciencias de sus feligreses el respeto y acatamiento al régimen instaurado por la voluntad popular, única fuente legítima de soberanía, según las leyes humanas y divinas.

«Ante esta contumacia en la rebeldía, que pone en grave peligro el orden público, y seguro el ministro de servir las necesidades nacionales, sometió a la reflexión del propio prelado la conveniencia de que se ausentara de España, evitando así que su presencia y su celo determinasen sucesos lamentables, seguramente lejanos de su voluntad, aun siendo esta tan notoriamente extraviada en el orden político. El prelado acató la indicación y pasó la frontera francesa a las once de la noche.

«Los católicos todos de esta diócesis, -que son, por la gracia de Dios, la casi totalidad de los hijos de Vasconia-, testigos de la actuación pastoral y apostólica de su celosísimo y amadísimo Sr. Obispo, y de una manera especial los fieles todos de las parroquias del arciprestazgo de Azpeitia, único visitado por S.E.R. desde el advenimiento de la República española, sabrán dar al contenido de esta nota el valor real y objetivo que debe dársele cuando, sin concreción de hechos de ninguna clase, atribuye carácter marcadamente político a las visitas pastorales del Excmo. Sr. Múgica.

«Por nuestra parte hemos de decir, sin temor de ser desmentido, que nunca, ni por nadie, ni en forma alguna, se requirió a nuestro amadísimo Obispo para que se abstuviera de dar a sus visitas tal carácter; que en la orden que le fue comunicada para que se ausentara de la diócesis no tuvo parte alguna la Santa Sede, única que, según la ley canónica y concordada, puede juzgar la conducta de los Obispos y sancionarla; y que si, por parte del Gobierno, precedió a aquella orden la formación de algún expediente, no fue en él oído en forma alguna el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Vitoria, a quien hubiera sido sencillísimo prestar con el testimonio de todos los testigos de su conducta la falsedad de cuanto le imputaba.

«Y si el Excmo. Sr. Múgica no fue por nadie oído y requerido no puede ser acusado de rebelde y contumaz.

también a la provincia eclesiástica burgalesa, expresando que "por indicaciones del Gobierno abandona también la

"No sabemos -porque la nota no lo dice- dónde se tenían en la mañana del lunes esas graves perturbaciones de que en ella se habla con la misma imprecisión y falta de datos concretos; lo que si sabemos es que ni a la villa de Bilbao -como alguien sin fundamento supuso- ni a ningún otro lugar de la diócesis tenía el Rvdmo. Prelado anunciada su visita para ese día; que su propósito era estar en el y en los restantes de la semana en su residencia de Vitoria, entre otras razones porque su salud se veía algo quebrantada; y que, por propia iniciativa, el viernes anterior nos había dado orden de hacer saber a los párrocos interesados que quedaba por el momento suspendida la visita que en el BOLETIN del 12 de mayo se había anunciado para el arcepresbiterio de Arceñiega."

Narraba seguidamente el vicario cómo "para no dar a la diócesis el escándalo de nuestro silencio", había visitado al día siguiente de la publicación de la nota gubernamental al ministro de la Gobernación quien le había escuchado "con el más vivo interés y con el mejor deseo de conocer la verdad y de rectificar una vez que llegara a persuadirse de que aquella orden fue motivada por inexactas informaciones", a cuyo mismo fin había presentado en el Ministerio un escrito;

"Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación,

(Excmo. Sr.:

(El que suscribe, Vicario general de la diócesis de Vitoria, con el debido respeto, ante S.E. comparece y dice:

(1) Que agradece al Sr. Ministro, con toda la sinceridad de su alma, la amabilidad y benevolencia con que ha tenido a bien recibirle y escucharle en la larga audiencia que se ha dignado concederle en una forma que estima en todo lo mucho que merece;

(2) Que pide a S.E. que se sirva tener por presentado y recibir el adjunto alegato en que consigna por escrito cuanto de palabra ha tenido el honor de exponer a la ilustrada y discreta consideración del Sr. Ministro en defensa del Excmo. Sr. Obispo de Vitoria, que invitado por S.E. se ausentó de su diócesis y de España el 17 del corriente;

(3) Que, interpretando los sentimientos de la inmensa mayoría de los diocesanos de Vitoria -que lamentan profundamente la privación de la presencia de su celosísimo Pastor a quien quieren y veneran con afecto filial- ruega al Sr. Ministro, con todo el fervor y encarecimiento de su alma, que tenga a bien revocar, sin demora alguna, la invitación hecha al excelentísimo Sr. Múgica para que se ausente de España, Patria amada de todos los españoles; y

(4) Que se digna tener por presentada la respetuosa protesta que, interpretando esos mismos sentimientos, se permite elevar ante S.E. por estimar que, al haber sido privada la diócesis de Vitoria de la presencia de su legítimo Pastor en una forma contraria a los sagrados cánones, se han violado el Concordato vigente pactado entre la Santa Sede y el Estado español y los sacratísimos derechos de nuestra Santa Madre la Iglesia católica, que sus fieles hijos, por deber, por convicción y por amor, queremos con todas las

patria querida" el obispo de Vitoria, a ello añadía que también había salido de España, "después de ver su palacio

veras del alma defender aun a costa de los mayores sacrificios que el Señor quiera pedirnos.

*"Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1931.- Excmo. Sr. Dr. Justo de Echeguren."*

"El alegato presentado con este escrito, lo mismo que nuestro informe oral ante el Sr. Ministro, iba encaminado a probar:

1) que la enemiga de determinados elementos contra la persona venerable de nuestro celosísimo Sr. Obispo era anterior al advenimiento del nuevo régimen y tenía por única y verdadera causa: a) sus reiteradas y paternales amonestaciones a determinada prensa para que cesara en su campaña contraria a la Religión y moral cristiana, b) su pastoral solicitud por conseguir que fuera expurgada una biblioteca pública de Deva de libros gravemente nocivos que en ella se daban a leer, y c) la publicación de las normas que deben seguir los católicos en toda lucha electoral;

2) que los aludidos elementos manifestaron en diversas formas y ocasiones, antes de que el Excmo. Sr. Múgica hiciera su visita al arciprestazgo de Apeitia, y ya desde el comienzo del nuevo régimen, su decidido empeño de obtener que nuestro veneradísimo Prelado fuera apartado del gobierno de esta diócesis;

3) que el Excmo. Sr. Múgica había acatado leal y sinceramente el nuevo régimen político de España, a tenor de las instrucciones de la Santa Sede, y había dado manifestas muestras de ello, singularmente en su visita al Excmo. señor Gobernador de Alava y al publicar en su BOLETÍN una circular sobre el deber de acatamiento a los Poderes constituidos recomendándole a su Clero y pueblo, poniendo por delante el ejemplo que el mismo nos había dado;

4) que no se ha probado, ni siquiera aducido, ni puede aducirse, porque no ha existido, hecho alguno concreto y demostrativo de que el Sr. Obispo de Vitoria abrigue la menor hostilidad contra el nuevo régimen proclamado, ni que haya hecho contra el manifestación alguna, directa ni indirecta en la única visita pastoral realizada después de proclamada la República -y que ya estaba anunciada en el BOLETÍN catorce días antes de su advenimiento- ni en ningún otro acto de su ministerio pastoral.

"Amablemente se nos prometió darnos la debida respuesta terminado que fuera el expediente que, para esclarecimiento de los hechos, había sido iniciado.

"La esperamos del todo conforme a la verdad y a la rectitud y espíritu de justicia del Sr. Ministro, y la verdad es que el Sr. Obispo de Vitoria es inocente de cuanto malos informadores, a quienes Dios perdone, han querido atribuirle."

arrasado por el incendio y despojado por la chusma impia" el obispo de Málaga, cuya mayor preocupacion habia sido, precisamente, "educar a los niños de los obreros y de los vagabundos".⁽¹⁸⁹⁾

Mas con caracter previo a la publicacion de estas informaciones habia tenido lugar la pronta comunicacion que el cabildo catedralicio de Vitoria dirigió al Dr. MUGICA asi como la remision por dicho cabildo de un telegrama al ministro de la Gobernacion pidiendo el inmediato regreso del obispo a la diócesis. En la comunicacion, tras calificar de "injustificado" el destierro a que el gobierno sometia al prelado, el cabildo queria expresar tanto su adhesión al Dr. MUGICA como su disposicion a la "defensa entusiasta de vuestra persona y de los derechos de la Iglesia conculcados de forma inexplicable", informandole de la "protesta vibrante" elevada al gobierno "con la publicidad necesaria que el caso requiere para ejemplo y orientacion de la diócesis..." y de las oraciones que elevaban para el regreso "del Padre y Pastor prestigiado desde ahora con la aureola del sufrimiento por la Religion, para bien de la diócesis..."; el boletín eclesiástico de Vitoria insertaba a continuacion el texto del telegrama cursado, en el que el cabildo senalaba como el Dr. MUGICA "siempre enseñó y prac-

Para finalizar su escrito se referia el vicario a como "la diócesis entera, con toda seguridad de que eran del todo falsas las imputaciones que se le hacian [al obispo] para justificar su separacion, se habia dirigido tanto al ministro de la Gobernacion solicitando el regreso del prelado, como al propio Dr. MUGICA manifestandole su adhesión, refiriendose expresamente a las comunicaciones cursadas por el cabildo catedral, a la actitud de la prensa diocesana defensora de la actuacion del obispo y al Ayuntamiento de Vergara que habia rechazado unánimemente una propuesta contraria al general sentir de la diócesis, para acabar pidiendo oraciones por el pronto regreso del prelado (31 de mayo de 1931, "La ausencia de la diócesis de nuestro Excmo. y Pvdmo. Sr. Obispo", BOE de Vitoria, año 67, 1 de junio de 1931, num. 13, págs. 367-364).

(189) s.r., "Crónica General.- Los Obispos de Vitoria y Málaga", BOE de Palencia, año 81, 1 de junio de 1931, num. 11, pag. 367.

tico sumisión Poderes constituidos", por lo que elevaba "respetuosa protesta" ante lo que volvía a calificar de "injustificada impuesta ausencia conculcatoria derechos Santa Iglesia".¹⁷⁰

(190) 21 de mayo de 1931, "Adhesión del Ilmo. Cabildo Catedral a su amadísimo Prelado", BOE de Vitoria, año 67, 1 de junio de 1931, núm. 13, págs. 364-366. El boletín diocesano, tras la reseña del destierro y la publicidad de esta adhesión, continuaría ayudando en los números siguientes, con uno u otro motivo, al extrañamiento del Dr. MUGICA; así dando cuenta del acto celebrado el 4 de junio en Elorrio, al cumplirse los veinticinco años de la beatificación del mártir de Berrio-Uchoa, y una vez destacaba el cronista la asistencia de las autoridades locales y de diputados del PMV, así como la nutrida concurrencia de fieles que había recibido con apiaños su llegada y la del vicario general de la diócesis, indicaba cómo el predicador, "interpretando fidelísimamente los sentimientos más hondos de la concurrencia", se había dirigido al vicario para rogarle que transmitiera al prelado la adhesión de los elorrianos y "su pena por la inconcebible ausencia forzosísima, sus anhelos por el pronto regreso y las oraciones por la obtención de la gracia de la inmediata terminación de la orfandad de la Santa Sede vitoriana" (4 de junio de 1931, "Elorrio en las Bodas de plata de la Beatificación del Mártir de Berrio-Uchoa", BOE de Vitoria, año 67, 15 de julio de 1931, núm. 16, pag. 501).

Con fecha 22 de junio el mismo vicario general dictaría, en contestación a consultas de los sacerdotes sobre los actos que, a semejanza de los realizados en la catedral, podían hacer por "las necesidades de la diócesis y de nuestro amadísimo prelado", unas normas para la celebración de cultos a fin de impetrar el regreso del obispo y en las que también instaba a rogar por la canonización del beato Berrio-Uchoa "como importantísimo medio para obtener la renovación religioso-moral del País Vasco". Tras ellas exhortaba al clero y fieles de la diócesis de que no cesaran en sus plegarias para la pronta reintegración del Dr. MUGICA a su sede (22 de junio de 1931, "Normas para la celebración de algunos actos religiosos en las presentes necesidades", BOE de Vitoria, año 67, 1 de julio de 1931, núm. 15, págs. 434-436). Con motivo de estas normas el mismo número del boletín diocesano pasaría a reseñar la serie de actos religiosos celebrados en distintas iglesias de Vitoria con el fin de implorar "las misericordias del Señor en las graves circunstancias actuales" (s.f., "Horas Santas en Vitoria por las presentes necesidades", BOE de Vitoria, año 67, 1 de julio de 1931, núm. 15, págs. 439-440).

Por último, y ya en octubre, el boletín daría la noticia de la recepción, el 21 de septiembre anterior, de "cientos de cartas y telegramas" a la residencia del Dr. MUGICA en la Puye con motivo de su santo y cumpleaños, así como de la celebración de diversos actos religiosos pidiendo su pronto regreso (s.f., "Vida diocesana. La oración del pueblo por su obispo desterrado", BOE de Vitoria, año 67, 1 de octubre de 1931, núm. 21, págs. 641-642). Como complemento de esta noticia el boletín publicaría una reseña sobre la estancia del Dr. MUGICA en el convento de las religiosas Hijas de la Cruz, en La Puye, donde a la sazón se hospedaba (s.f., "La estancia de nuestro Sr. Obispo en La Puye", BOE de Vitoria, año 67, 15 de octubre de 1931, núm. 22, págs. 653-654).

Noticia de estas manifestaciones daría "El Debate" bajo el título "El extrañamiento del obispo de Vitoria", resumiendo la nota del vicario general de esta diócesis e incluyendo íntegro el documento de adhesión del cabildo.¹¹⁷⁷ A ellas vendrían a sumarse enseguida las de los fieles de la diócesis a través de las instituciones de la Acción Católica radicadas en ella que, de esta forma, publicarían el 14 de julio un manifiesto, "A los católicos vascos", firmado por todos los presidentes de las Juntas, y por el que exhortaban a los diocesanos a reiterar con perseverancia el regreso del prelado; junto a esta publicación dichos presidentes habían dirigido un telegrama al Dr. MUGICA y otro al presidente del gobierno provisional pidiendo la reintegración de aquel a su sede. A estas actuaciones y demandas se unirían también las de los diputados católicos del País Vasco, que elevaron igual petición a ALCALA ZAMORA y también enviaron un telegrama de adhesión al Dr. MUGICA, cesas ambas que igualmente hicieron diversos sacerdotes de la diócesis.¹¹⁷⁸ El boletín diocesano daría la correspondiente publicidad a todos estos documentos.¹¹⁷⁹

(191) "El Debate", 3 de junio de 1931. Sin duda por la culminación de la serie de hechos contra la Iglesia que venía a representar la expulsión del obispo de Vitoria, este periódico había iniciado el 24 de mayo la publicación de las protestas de asociaciones, colegios, entidades religiosas, etc. que, en forma de telegramas, escritos y recogida de firmas, eran elevados al gobierno pidiendo que se respetaran las órdenes religiosas, protestando por la quema de conventos y por los decretos antirreligiosos y pidiendo el regreso de SEGURA (entonces ausente por propia voluntad) y de MUGICA. Estas publicaciones incluían aquellos casos en que los alcaldes o gobernadores ponían multas a aquellos que protagonizaban la recogida de firmas, tema al que nos referiremos al hablar del clero.

(192) Ya hemos visto, además, y aparte de lo indicado en la nota anterior, que la acción católica femenina de Segovia y "más de cinco mil mujeres" de esa diócesis, se sumaron a las protestas elevadas al gobierno, entre otras cuestiones, por la expulsión del obispo de Vitoria (ver la nota (19)).

(193) Diversas fechas, "Acción católica diocesana. Por la reintegración del Excmo. Prelado a su Diócesis", BDE de Vitoria, Año 67, 1 de agosto de 1931, núm. 17, págs. 543-551. Por lo revelador de la reacción provocada por el destierro del Dr. MUGICA incluimos en el apéndice estas comunicaciones. Ver el apéndice núm. 22.

8. La libertad de creencias y cultos.

Muchas vicisitudes habia sufrido la confesionalidad del Estado español desde la solemne proclamación de la religión católica, "única verdadera", como religión de la nación española, y con prohibición del ejercicio de cualquier otra, efectuada por el artículo 12 de la Constitución de 1812, proclamación que alcanzaría su vertiente opuesta en la Constitución de 1869 y en el proyecto de constitución de la I República, textos en los que se reconocería la plena libertad de cultos, que sería de nuevo rechazada por la Constitución de 1876, que de nuevo proclamaría la confesionalidad del Estado y que si bien procribiría que nadie fuera molestado por sus creencias religiosas o por el ejercicio privado de cualquier culto que no fuera el católico, no permitiría ceremonia o manifestación pública alguna que no fuera la de la religión del Estado.⁽¹⁴⁾

Ya hemos visto cómo para acabar con estos incesantes vaivenes del constitucionalismo español y para determinar una de las esenciales premisas propias de un Estado moderno, el Estatuto jurídico del Gobierno provisional publicado en

(14) FIERRO GALVÁN, Enrique, *Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936)*, Madrid 1968, págs. 24, 63, 93, 104-105, 123-124, 143 y 158. El gobierno Canalejas interpretaría, no obstante, tan ampliamente el artículo 11 de la Constitución de 1876, que establecía tal regulación, que por real orden de 11 de junio de 1910 autorizaría el uso público de signos externos de otras religiones distintas a la católica, por lo que podían dar testimonio de su existencia, entendiéndose que tal actuación no venía encerrada en el concepto "manifestaciones públicas" a que la norma suprema aludía; esta orden, como es lógico, fue ampliamente protestada tanto por la jerarquía española como por el Vaticano. (CASTELLÓ, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. un estudio jurídico-administrativo. 1767-1966*, Madrid, 1973, págs. 355-357).

la "Gaceta de Madrid" del 15 de abril, proclamaba en su párrafo tercero "su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas".

Tal proclamación dio, aunque aun no hubiera pasado del terreno de los principios por no ser desarrollada por norma alguna, sus inmediatos frutos en la interpretación que de ella hicieron las autoridades locales. Actuación paradigmática de ello fue, de esta forma, la seguida por la Diputación provincial de Valencia que, al punto, acordó solicitar al obispo que la imagen del Sagrado Corazón entronizada en el palacio provincial fuera trasladada de dicho lugar, al objeto de que la corporación fuera ajena a toda "ostentación que pudiera significar... una profesión de fe, incompatible con el carácter de todo Organismo público que, por serlo, está obligado a llevar al maximum su respeto para todas las creencias". A efectos de que tal acuerdo fuera de todos conocido la Diputación no solo dio traslado de él al prelado sino que lo publicó como nota oficiosa en la prensa local por lo que el Dr. FARRADO GARCÍA hizo seguir el mismo cauce a la contestación que dio a la corporación provincial. En tal contestación el prelado agradecía en primer lugar la buena voluntad de la Diputación al significar en su comunicado que, junto al interés en quitar la imagen de su sede, también quería huir "de toda estridencia antirreligiosa -que no estimaría sensata ni correcta, y que heriría justamente el indudable y arraigado sentimiento católico de la provincia-", razón por la que no pretendía que el traslado de la imagen se hiciera sin el correspondiente ritual religioso; mas seguidamente pasaba a defender, como doctrina católica, que por parte de los organismos públicos o privados había de darse testimonio de profesión de fe, lo que venía a equivaler a que, para la

jerarquía, según las palabras del Dr. PARRADO, debía mantenerse la plena alianza, con el debido reconocimiento de la supremacía de lo espiritual, entre el poder civil y el religioso; visión que, en consecuencia, excluía toda posible proclamación del carácter laico de los poderes públicos. No otro sentido cabe extraer de la postura que mostraba el obispo en unas frases que, según decía, venían a "rectificar y esclarecer", ya que a ello le obligaba la función de magisterio espiritual que le había encomendado la iglesia, "algunos puntos que esa Comisión ha estimado pertinente tocar en el oficio y nota oficiosa de referencia", lo cual hacía con el deseo de que sus puntualizaciones fueran interpretadas "sin la menor lesión ni menoscabo de los respetos mios y de quienes conmigo sienten en católico, a las personas, intenciones y autoridad de los que integran la Comisión gestora":

"Hubiera entre los palentinos de la capital y su provincia verdadera diversidad de creencias, o de religiones, y no mas bien unos -a mi modesto juicio, los mas- que profesan la Religión católica, y otros que no profesan religión alguna, es decir, creyentes y no creyentes o incredulos, y aun en este supuesto sería obligación mia advertir a los creyentes que no es esa sino esta la doctrina del Catolicismo: las corporaciones u organismos públicos, lo mismo que los privados y que los individuos, deben no considerar incompatible con su propio carácter toda profesión de fe, antes perfectamente compatible con el, y aun estimar el hacer profesión, en esta materia de la verdad -que como en cualquiera otra solo una puede ser- por alguna de las varias formas usadas en el Catolicismo... Tal deber hallase entre los católicos abonado por solidísimas razones, una de ellas, por vía de ejemplo, la que tiene su base en la creencia -no ya solo de los católicos, sino simplemente de los que admiten la existencia de Dios- de que también las Corporaciones públicas todo lo que son y tienen originariamente se lo deben a Dios y de Dios en todo instante por entero dependen. Y obligación es del deudor, la primera de todas, reconocer que debe, y del que es dependiente, no negar que lo es."

Estas razones valían, además, singularmente, para los organismos públicos españoles toda vez que, añadía el obispo, "el Estado español es oficialmente católico todavía".

Seguían a estas primicias teóricas de la jerarquía sobre la concesionalidad de los poderes públicos efectuadas por el Dr. FARRADO, otras, también pioneras del debate que más tarde se abriría sobre este extremo, tendentes a clarificar el derecho de propiedad sobre cosas sagradas que, al parecer, expresaba la Diputación en su comunicado, amén de ciertas puntualizaciones sobre la forma en que, según ella, se había efectuado en su día la entronización de la imagen que ahora se procedía a quitar, todo ello, cierto es, expresado en términos que, en estos primeros tiempos de la República, eran reveladores de la concordia que querían mantener tanto la esfera civil como la eclesiástica en la generalidad de los casos.***

(195) "Otro punto, doctrinal como el anterior, toca esa Comisión en las palabras siguientes: 'resolvió trasladar (la imagen) a la Capilla de los Establecimientos de Beneficencia -ya que es de la propiedad de la Diputación- donde puede rendirsele el culto que se la debe...'

«La idea de propiedad que aquí se expresa, puede referirse a la sagrada imagen o a la Capilla. Pero en uno y otro caso la palabra "propiedad" sólo en un sentido menos propio puede emplearse en buena doctrina católica, ya que en ambos se aplicaría a cosas sagradas, las cuales, mientras no dejen de serlo por pérdida del carácter que les dio la bendición o consagración, pertenecen al dominio y jurisdicción espiritual de la Iglesia; sin perjuicio de ciertos derechos que entidades o personas no eclesiásticas sobre ellas pueden tener y ejercer por concesión de la misma Iglesia.

«Un tercer punto, ya no doctrinal sino histórico, hay en la comunicación, el cual merece esclarecimiento ante los católicos: "la Comisión ha revisado el acuerdo que motivó la entronización, en el que no hubo unanimidad..." Si bien el acuerdo se adoptó antes de la venida a Palencia, creo poder afirmar, sin temor de equivocarme, que en cuanto a la entronización misma, que es a la que se refieren las palabras copiadas, sí que hubo unanimidad en la Corporación, y unanimidad con la añadidura de los votos de todos los Ayuntamientos de la provincia, menos el de uno, que estando conforme con la significación fundamental de la entronización, discrepó en cuanto a la conveniencia de efectuarla en aquellas circunstancias. En lo que no hubo unanimidad de la

El deseo de que prontamente se implantara la libertad de creencias y el respeto a todas las religiones sin que el Estado hubiera de proclamar la preeminencia de ninguna de ellas sobre las demás no solo era reclamado por instituciones y mediante acuerdos como el que acabamos de describir, se trataba de una necesidad sentida tanto por el anticlericalismo profesado por las bases que habían hecho posible el advenimiento de la República y que, de este modo, querían hacer desaparecer la preeminencia de la Iglesia, considerada la tradicional aliada de la monarquía que acababa de caer, como desde las más diversas esferas, incluso

Corporación fue en el emplazamiento de la imagen, mas éste no es la entronización sino una circunstancia accidental de ella. A la cual circunstancia, tal vez, ha querido aludir esa Comisión y, sin duda alguna, en el desacuerdo parcial habido con respecto a este accidente, ha sido su voluntad apoyarse, pues así lo expresa, para resolver como lo ha hecho.

«Por no alargarme mas, con molestia para esa Comisión, concluyo significando que fue cedido mio evitarle oportunamente que la entronización del S.C. de Jesús en el Palacio provincial le plantease caso ninguno, conforme lo podría acreditar el señor gobernador civil de la provincia, ante el que este Obispado había hecho las gestiones pertinentes, dentro de la armonía que tanto es de estimar y agradecer, conjuntamente con el distinguido señor Presidente de la Excelentísima Diputación.»

«2 de mayo de 1931, "Documental, Datos para la historia. Un oficio de nuestro Rvmo. Prelado al señor Presidente de la Comisión gestora de la Diputación", BOE de Palencia, año 81, 15 de mayo de 1931, num. 10, págs. 306-308».

La rapidez con que la Diputación provincial de una diócesis tan tradicional como la de Palencia se pronunció sobre la aconfesionalidad de los poderes públicos y la pronta respuesta de la jerarquía efectuando las correspondientes puntualizaciones a esta postura fue causa de que la prensaciera la debida difusión al hecho y, así, con independencia de la publicidad que se realizó por la prensa local, "El Debate" del día 6 de mayo reprodujo casi en su totalidad la carta de contestación del Dr. PARRADO GARCÍA.

aquellas formadas por creyentes progresistas,"" prueba de ello es el artículo escrito por aquellas fechas por D. Miguel de UNAMUNO y en el que, refiriéndose a diversos extremos (entre ellos, con una nada acertada visión política, a la imposibilidad de que en España se produjera un alzamiento militar propiciado por el fascismo), trataba del problema de la libertad de cultos defendiendo, no obstante -cosa que, como veremos, la República no estaría dispuesta a asumir- el sostenimiento de la Iglesia católica por el Estado, en base, sobre todo, a la consubstancialidad con el carácter e historia españoles que aquella tenía:

"El actual pueblo católico español -católico, litúrgico y estético mas que dogmático y ético- tiene poco o nada de clerical. Y aquí no se conoce nada que se parezca a lo que en América llaman *fundamentalismo*, ni nadie concibe en España que se le persiga judicialmente a un profesor por profesar el darwinismo. El espíritu católico español hoy, pese a la leyenda de la Inquisición -que fue mas arma política de raza que religiosa de creencia-, no concibe los excesos del cant puritanesco. Aquí no caben ni las extravagancias del *Ku-Klux-Klan* ni los furrores de la ley seca en lo que tengan de inquisición puritana. Ahora, que acaso no convenga en la naciente República española la separación de la Iglesia del Estado, sino la absoluta libertad de cultos y el subvencionar a la Iglesia católica, sin concederle privilegios, y como Iglesia española, sometida al Estado, y no separada de él. Iglesia católica, es decir, universal, pero española, con universalidad a la española, pero tampoco de imperialismo. Se ha de reprimir el espíritu anticristiano que llevo al episcopado del rey y al rey mismo a predicar la cruzada. Los jóvenes españoles de hoy, los que se han elevado a la conciencia de su espí-

(196) TUSELL da cuenta de cómo cuando el gobierno provisional estableció por decreto la libertad de cultos OSSORIO y GALLARDO se dirigió a ALCALA ZAMORA para protestar del hecho; no porque él no fuera un ferviente partidario de la libertad de cultos sino por considerar que una medida de este orden no aprobada por las Cortes constituyentes era una grave transgresión jurídica. TUSELL GOMEZ, Javier, *Historia de la democracia cristiana en España*, II, Madrid, 1974, pág. 210.

ritualidad en estos años de Dictadura, bajo el capullo de esta, no consentirán que se trate de convertir a los *moros* a *cristazo limpio*. Y en esto les ayudarán sus hermanas, sus mujeres, sus madres. Y a la mujer española, sobre todo a la del pueblo, no se la maneja desde el confesonario. Y en cuanto a las damas de acción católica, su espíritu -o lo que sea- es, mas que religioso, económico. Para ellas el clero no es mas que gendarmería." (197)

La necesidad, así y de otras formas expresada desde los más diversos sectores de la sociedad española, hizo que el gobierno provisional se apresurara a dictar la norma jurídica que desarrollara el párrafo tercero de su Estatuto y, de esta manera, por decreto de 22 de mayo de 1931, determinó el fin de uno de los mayores privilegios de la Iglesia católica al permitir la libre expresión de toda otra creencia tanto privada como públicamente y al acabar, además, con la obligatoriedad, hasta entonces sufrida por los organismos públicos, de asistir a ceremonias de carácter religioso:

"La encubierta rigidez del exclusivismo jurídico religioso imperante en el constitucionalismo español a base de normas virtualmente derogadas con el triunfo de la República, quedó levemente

(197) "Comunismo, fascismo, reacción clerical y problema agrícola". "El Sol", 14 de mayo de 1931. Aunque los temas tratados por UNAMUNO en este artículo exceden del ámbito de esta tesis, lo singular de sus consideraciones y su falta de visión de lo que sería el futuro inmediato de la historia de España, nos hacen incluirlo en el apéndice. Ver el apéndice núm. 23.

quebrantado con la R.O. de 10 de junio de 1910; mas aquel esfuerzo liberal del Gobierno Canalejas fue a su vez estrangulado, mediante subrepticias ligaduras extendidas por las instituciones monarquicas, y es esto lo que ha impedido por dias multiples que el derecho publico subjetivo en que culmina el respeto a la vida de la conciencia llegue a adquirir vigencia plena en el derecho español.

«Son los pactos historicos de las instituciones caidas los que han mantenido la libertad de cultos, confinada en el area irrespetuosa por depresiva de la mera tolerancia.

«Cuando el Gobierno provisional, en razon de su caracter siquiera sea transitorio, de organo supremo de las funciones soberanas, acepto, segun declaracion propia, la mision de establecerse como Gobierno de plenos poderes, hizo patente su respeto absoluto a la conciencia religiosa mediante la libertad de creencias y de cultos. De esta suerte, ante lo historico de las fuerzas y organizaciones politicas que en lucha por el imperio de las libertades publicas han sido principales artífices de la instauracion del regimen republicano, quedaba orillado con el principio de los medios modernos que ha aceptado el Gobierno provisional como base de la nueva estructura del Estado español.

«Al llevar la tolerancia de cultos a un regimen de plena libertad, titulado garantia juridica de la conciencia individual y colectiva, no pretende el Gobierno de la Republica, antes bien, hace expresa protesta en contrario, inierir agravio alguno a los sentimientos religiosos que hasta ahora han gozado en el pais trato de privilegio. Estos son acreedores al mas profundo respeto del Poder publico, pero espera tambien, y lo declara solemnemente, que en la esfera de la libertad tengan igual cabida todos los intimos imperativos del espiritu que forman el recatado patrimonio de conciencia del ciudadano y de las organizaciones confesionales que existen o puedan existir en el pais.

«Es hoy la norma de la libertad de cultos, norma de derecho publico internacional. Norma de vigencia obligada en los pueblos de la Europa oriental a virtud de los acuerdos complementarios de la Sociedad de Naciones, ejemplo expresivo el de Polonia; norma aceptada libremente incluso por pueblos de maxima relevancia catolica como Irlanda, Polonia y Baviera. En el primero, con unas instrucciones de derivacion radical, articulo octavo de la Constitucion de 1922; en el segundo, articulos 17 y 18 de la Constitucion de 1919, mediante afirmaciones taxativas e inequivocas.

«La propia Espana, por imperativos de la realidad, hace en Marruecos una politica de cultos que es de mayor comprension que la desenvuelta en el hogar patrio.

«Habia llegado, pues, en este orden, como en tantos otros, una insularidad entre normas del Estado espanol y el mundo politico moderno. La propia catolicidad reclama integral libertad de cultos alli donde existen iglesias estatales privilegiadas o donde la Iglesia catolica encuentra obstaculos para su accion, y es que la libertad de cultos a mas de ser para la vida interior la norma condicionante, es para la vida civil la garantia objetiva del respeto.

«Por las razones antedichas, el presidente del Gobierno provisional de la Republica, con el asenso del Consejo, y a propuesta del ministro de Justicia, decreta:

«Articulo n.º 1. Nadie en ningun acto de servicio, ni con motivo de una relacion con organos del Estado, esta obligado a manifestar su religion. En su virtud, los funcionarios asi civiles como militares, se abstendran de inquirir sobre las creencias religiosas de quienes comparezcan ante ellos o les esten subordinados.

«Articulo n.º 2. Nadie esta obligado a tomar parte, cualquiera que sea su dependencia respecto del Estado, en fiestas, ceremonias practicas y ejercicios religiosos.

«Artículo nº 3. Todas las confesiones están autorizadas para el ejercicio, así privado como público, de sus cultos, sin otra limitación que las impuestas por los reglamentos y ley de Orden público.»¹⁹⁸

Como ya hemos indicado anteriormente la reacción de la jerarquía ante la nueva norma que venía a agravar la línea ya abierta por el decreto del día 6 sobre la enseñanza religiosa¹⁹⁹ fue inmediata y, así, el cardenal VIDAL envió el mismo día de su publicación un telegrama a ALCALA ZAMORA protestando por su promulgación así como reiterando su disconformidad con las restantes disposiciones dictadas por el gobierno provisional. En su carta de contestación del día 26 siguiente el presidente del gobierno provisional minimizaría la trascendencia del decreto manifestando su desacuerdo con las apreciaciones del cardenal ya que, decía, en su preámbulo se aducían suficientemente las razones y precedentes que justificaban la actuación del gobierno y, por otra parte, la nueva norma no era más que la mera reglamentación "de un principio ya formulado como indiscutible en el Estatuto provisional del Gobierno", reglamentación que, además, tan solo subsistiría hasta la reunión de las Cortes, "cuyo acuerdo definitivo parece inequívoco", tratándose, en suma, de una norma que imperaba en todos los estados católicos y a la que no podía sustraerse un gobierno republicano.²⁰⁰ En su replica del

¹⁹⁸ "Gaceta de Madrid", núm. 140 de 13 de mayo de 1891, págs. 676-679.

¹⁹⁹ ver el artículo sobre la cuestión de la enseñanza.

²⁰⁰ *Església i Estat durant la segona*, I, págs. 65-66.

14 de junio insistiría el cardenal en la improcedencia de que el gobierno provisional dictara tales decretos.⁴⁰¹ dando cuenta seguidamente de los hechos y de su personal opinión al Secretario de Estado Vaticano en la ya citada carta de 27 de junio.⁴⁰²

(201) Ver la nota 108 de este capítulo.

(202) "Como el gobierno es de conjunción y se conoce había adquirido compromisos con elementos avanzados que le prestaron ayuda para derribar al régimen anterior, dictaba decretos que constituían violaciones de las vigentes leyes y disposiciones concordadas (aquí VIDAL se refiere a los relativos a la cuestión de la enseñanza, del que en el capítulo correspondiente trataremos, al que establecía la libertad de creencias y cultos y al relativo a los bienes de la Iglesia, que tratamos en la nota 240 de este capítulo) no era decoroso por parte nuestra dejarlos pasar en silencio, pero convenía proceder de manera que nuestra actuación no obstaculizase la de la Santa Sede y la del Sr. Nuncio, pues si bien son diferentes la acción diplomática y la pastoral, deben complementarse mutuamente y nunca estorbarse. Al efecto telegraficé, en nombre de los sufragáneos y yo, al Sr. Presidente del Gobierno Provisional, sin dar empero publicidad al telegrama, doliéndome de la aparición en la Gaceta de los referidos decretos; lo que motivó la contestación del Sr. Presidente con la réplica y duplica respectivas" [de esta duplica a que se refiere VIDAL, de fecha de 18 de junio, y de su extraordinario laconismo ya hemos tratado: ver nota 122].

Como uno de los anexos a esta carta enviaba VIDAL al Vaticano una "hoja de orientación" suscrita por la Acción católica de la diócesis relativa a los deberes de los católicos, en uno de cuyos puntos se trataba el tema de la libertad de cultos; basándose en párrafos del "Syllabus" de Pío IX y de las "Inmortale Dei" y "Libertas" de León XIII, negaba la licitud de defender la libertad de cultos como si fuera un derecho natural del hombre, como si se reconociera igualmente verdaderas todas las religiones o como si el Estado pudiera ser indiferente en esta materia, toda vez que si la totalidad moral de los ciudadanos había aceptado la religión católica como verdadera, el Estado debía reconocerla y darle carácter oficial aunque sin violentar a los que no quisieran profesarla, como la Iglesia tampoco lo hacía, esta era la única manera de informar en el orden moral y religioso la vida de la sociedad; mas si la religión católica no fuera aceptada por la totalidad moral de los ciudadanos, el Estado debía concederle amplia libertad y defender todos sus derechos para que pudiera alcanzar sus fines sobrenaturales, esto era exigencia de los deberes del Estado hacia Dios y de los derechos naturales y la libertad de los ciudadanos católicos, no obstante, la doctrina católica tenía por lícita, en casos hipotéticos, la tolerancia religiosa, si bien no sistemáticamente y a fin de conseguir algún bien importante o de evitar males graves; el determinar cuando se podía aceptar esta tolerancia o libertad religiosa y en que grado podía admitirse en el ejercicio público del culto, en la enseñanza, etc, pertenecía exclusivamente a la Iglesia, que ejercía este derecho de acuerdo con el poder civil y según exigían las circunstancias. (Op. cit., I, págs. 87 y 96-97).

La maxima protesta de la jerarquia fue, no obstante y como hemos apuntado, la contenida en el "memorial de agravios" que el cardenal SEGURA dirigió al gobierno provisional desde Roma el 3 de junio y en el que, en una relacion cuya enumeracion no seguia, ni mucho menos, el orden de importancia de los hechos que lamentaba, figuraba en undecimo lugar "la libertad de cultos, que vulnera leyes fundamentales del Estado y articulos sustanciales del concordato."²⁰³

Mas al margen de estas manifestaciones de la jerarquia y de las formuladas por los seglares catolicos²⁰⁴ el tema era de tal trascendencia en los avatares de las relaciones Iglesia-Estado en Espana que recibio un amplio tratamiento por parte de la prensa. Asi, "El Debate" del mismo dia 23 de mayo publicaba el texto del decreto en primera pagina y, a su lado, en la columna titulada "Lo del dia", el comentario

(203) Ver la nota 106 de este capitulo.

(204) Ya hemos aludido en la nota 119, al tratar de la expulsion del cardenal SEGURA, a la "exposición de protesta", elevada al presidente del gobierno provisional 'por más de cinco mil bujeres' de la diocesis de Segovia, en la que, aparte de referirse a las otras cuestiones allí apuntadas, protestaban expresamente "contra los decretos antirreligiosos... como son los de libertad de cultos, de enseñanza laica, supresión del santo crucifijo en las escuelas y demás disposiciones publicadas en materia religiosa", solicitando, en consecuencia, al gobierno que:

"...se abstenga de legislar en materia religiosa y si algo cree debe hacer, lo lleve a efecto, negociando con la Santa Sede, pues de hacerlo por sí mismo, además de resultar nulo, por tratarse de una esfera en la que no tiene jurisdicción el Estado, perturbaria las conciencias, como sucede con las disposiciones de las que nos vemos obligados a protestar. Así como que defienda la Religión católica, que es la de la inmensa mayoría de los españoles, siendo digno de tenerse en cuenta además que nuestra Religión es nuestra historia patria, y a ella debe España todo el peso inponderable de sus glorias y de su civilización", (20 de junio de 1931, "Notas diocesanas", BUE de Segovia, año 76, 30 de junio de 1931, núm. 12, págs. 251-252).

del periodico a la nueva norma, comentario que, esgrimiendo el mismo error del que mas tarde se hacia eco SEGURA, denunciaba que la norma violaba la Constitución de la nacion y, eso si, el concordato vigente entre el Estado espanol y la santa Sede; mas, junto a esta denuncia, era preocupacion esencial del periodico dejar constancia de que "ni los cultos disidentes ni las izquierdas anticlericales van a lograr grandes conquistas de orden práctico" ya que la libertad de cultos solo iba a servir para demostrar que en España solo el culto y la religion catolica tenian una masa de fieles. A ello anadia el diario la fundada critica del procedimiento seguido por el gobierno que, siendo inminente la reunion de las Cortes constituyentes y siendo en el texto constitucional, con sus oportunos y siempre extensos debates, donde consuetudinariamente se habia abordado tan trascendente cuestion, habia decidido regularla con sus solos poderes, dejando al margen la voz del pueblo y el buen hacer democratico, como si le fuera preciso "dar, de cuando en cuando fe de vida del espiritu contrario a la Iglesia" que en el imperaba, atropellando incluso una norma suscrita con el Vaticano que ni siquiera habia denunciado, lo cual podia haber realizado y llevar a otro concordato el tema de la libertad de cultos en lugar de actuar de esta ilicita forma con un pacto internacional, cosa esta que era una ofensa al Derecho que ningun Estado se atrevia a perpetrar. (408)

Tambien el independiente "El Sol" publicaria el texto integral del decreto aunque con un dia de retraso a la publicacion efectuada por "El Debate", periodico para el que el tema tenia una indudable mayor trascendencia. El comenta-

(408) "El Debate", 23 de mayo de 1931.

rio que hacia era, como cabía esperar, de un sesgo muy distinto al efectuado por el de Angel HERRERA. Publicado en su columna tambien titulada "Lo del día", lo incluía con el subtítulo "Libertad de cultos en el derecho de gentes" y en el trataba del respeto que, hasta la fecha, habrían demostrado desde sus propias posiciones los representantes del poder civil y del eclesiástico, refiriéndose concretamente al ministro de Justicia, Fernando DE LOS RÍOS, por una parte, y a los arzobispos ILUNDAIN, de Sevilla, MELO, de Valencia y VIDAL de Tarragona, amen de citar las irases de SEGUERA relativas a la independencia de la Iglesia respecto de las cosas entregadas por Dios "a las disputas de los hombres" y tratar de la enciclica "Rerum Novarum" en cuanto preceptuaba la intervencion de la Iglesia en el orden social, mas todo ello para apostillar que la lucha social "sin ser indiferente a las formas de gobierno, no esta subordinada a ellas". Independencia total venia a proclamar, en definitiva, el periodico y maximo respeto mutuo muy alejado de la vision de consubstancialidad de hispanismo y catolicismo propugnada por Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, a quien citaba profusamente para denunciar el envejecimiento de sus ideas tan solo derendidas por los "catolicos intransigentes" y concluir, como coloron del comentario, que "el liberalismo es convivencia civil, tolerancia, derecho de gentes" y que "todas las creencias, y desde luego todos los cultos, merecen no ya respeto, sino garantias de amparo y de seguridad por parte de los poderes publicos", razón por la que, segun su opinion que, como hemos visto, no era ni mucho menos compartida por la jerarquia -a pesar de que la anterior postura de esta era traída a colacion por el diario para mejor fundamentar sus palabras- "el derecho que establece la libertad de cultos sera recibido generosamente por una buena parte de la opinion catolica", toda vez que,

finalizaba, "la libertad de cultos forma parte del derecho de gentes".⁽²⁰⁶⁾

Aparte de esta publicidad y comentarios de la prensa y de la dada por algunos boletines eclesiásticos,⁽²⁰⁷⁾ no fue

(206) "El Sol", 24 de mayo de 1931. Es obvio que la referencia del periódico a la postura de respeto mantenida por los cardenales ALONSO, MELÓ y VIDAL está basada en los respectivos escritos de estos de 30 de abril (ver la nota 57), 15 de abril (ver la nota 4) y 4 de mayo (ver la nota 77). Las frases de SEGURA son de su pastoral de 1 de mayo de la que, como recordamos, "El Sol" publicó un objetivo resumen (ver la nota 75).

(207) Así lo harían, entre otros, el de Palencia, que lo incluiría en su número de 1 de agosto (págs. 450-452) o el de Segovia que, sin embargo, no lo publicaría hasta el 29 de febrero de 1932, conjuntamente con el anterior decreto de 6 de mayo sobre la no obligatoriedad de la enseñanza religiosa; este número incluía, además, como prueba de la efectividad que el gobierno quería dar a los derechos reconocidos por el decreto, ya por estas fechas incorporados al texto constitucional, el telegrama cursado por el ministro de la Gobernación al gobernador provincial -y que es de suponer recibirían todos los gobernadores- a efectos de que no se coartara la libertad de la propaganda realizada en los pueblos por la iglesia luterana. No cabe duda que el ánimo de efectuar esta publicación en el boletín diocesano lejos de coadyuvar al ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido respondía al deseo de constatar los ataques que el gobierno infería a la Iglesia católica al favorecer así la difusión de otras creencias ajenas a los postulados de la verdad defendida por la tradicional religión patria:

"Se comunican que algunos miembros de la iglesia evangélica han encontrado dificultades en algunos pueblos para la propaganda de su religión. Ruego a V.E. que si se presentan en esa provincia algunos de dichos propagandistas, ordene V.E. a los alicales respeten dicha propaganda y amparen el derecho a realizarla, cumpliendo los requisitos legales. En la actualidad recorren las provincias del Norte varios propagandistas evangélicos, y dentro de pocos días comenzarán su propaganda en Córdoba, Sevilla y Extremadura con Miguel Aguilera y don Claudio Gutiérrez Parin. Ruego a vuecencia evite que se entorpezca la propaganda lícita a que se consagran dichos señores. Le saludo". (Diversas fechas, "Disposiciones del Poder Civil", B.O. de Segovia, año 77, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 107-108).

el tema de la libertad de creencias y cultos uno de los que merecieron una particular atención por parte de la jerarquía. Así, entre los boletines eclesiásticos consultados solo hemos encontrado la debida atención a la cuestión formulada con carácter público, en la pastoral que el Dr. José ALVAREZ MIRANDA dirigió a sus fieles tratando de los dos temas mas candentes del momento: la enseñanza religiosa ⁽²⁰⁸⁾ y la libertad de cultos.

Respecto a este ultimo punto queria el obispo elevar su "viril protesta" al tratarse de una cuestión "que tan al vivo hiere nuestros sentimientos religiosos, y ofende tan gravemente a nuestra Madre la Santa Iglesia Católica", si bien no queria molestar ni aludir a nadie con sus palabras, tan solo era su pretensión "combatir errores y defender la doctrina de la Iglesia", para lo cual el prelado pasaba a hacer unas consideraciones sobre la democracia con absoluto olvido de una de las mas características connotaciones del sistema, cual es el respeto a las minorías (que, en el caso de la libertad de cultos poco podía atañer, en contra de lo que el Dr. ALVAREZ decia, a ateos e indiferentes al dirigirse, precisamente, a otras religiones) pensamiento, por otra parte, que, en puridad, debería estar vinculado al catolicismo sino intentara en aquellos momentos asegurar su desarrollo a base de negar la expresión de cualquier otra creencia y desear su reconocimiento exclusivo; aludía, lógicamente a la vulneración del concordato y delenda, por ultimo, la mas absoluta unión entre el poder civil expresado en esta ocasión con el tradicional simbolo belico y el religioso:

(208) Ver el capítulo relativo a la cuestión de la enseñanza y el apéndice 7 de dicho capítulo en que reproducimos íntegra la pastoral.

"...ahora que tanto se encomia y proclama la ley de las mayorías, como soberanía nacional, nadie se atreverá a negar que no solo la inmensa mayoría de los españoles es católica, sino la casi totalidad es católica; y no vemos la oportunidad y urgente necesidad de la libertad de cultos, que solo desearán los protestantes, ateos o indiferentes, que son relativamente pocos, en comparación con el número de católicos, y como por otra parte es una manifiesta violación del Concordato, ya hemos dicho, que solo podría hacerse de acuerdo con la Santa Sede. ¡Uh! lo que España debe a la Religión, lo que ha hecho y está haciendo la Iglesia por España. Nuestra brillantísima historia nacional está unida a la Iglesia, vinculada a la Religión, y así lo pregonan la cruz y la espada que van unidas."

Ante esta situación los católicos deberían avivar su fe y asistir con mayor frecuencia a los actos de culto, como una forma de compensar la presencia de otras creencias, que podía comenzar a darse, y de demostrar la mayoría de la religión católica. Para el obispo la proclamada libertad podía ser, incluso y paradójicamente, causa de desaliento y ejemplo de persecución de la Iglesia, por ello recomendará a los fieles no caer en aquel, pues "la Iglesia será perseguida; pero nunca vencida."

El gobierno, por otra parte, podía contar con el apoyo de los católicos para mantener el orden, la paz y la tranquilidad, pero, sobre todo, si quería alcanzar el éxito, necesario era que contara con la ayuda de Dios, de quien no podía prescindir.

En contraste con este camino, que los poderes públicos deberían seguir si deseaban culminar la meta de la prosperidad social, la realidad era que desde el nuevo régimen todo era contrario a la religión, como si esta actitud pudiera ser la esperada panacea para solucionar

los males que aquejaban a los más menesterosos:

"Se ha desencadenado un furioso vendaval antirreligioso; se han levantado olas de recia tempestad contra la Iglesia, de odio sectario contra todo lo santo, sagrado y religioso, contra tantas cosas, causando inmensa amargura y heridas profundas en el corazón cristiano, como la escuela sin religión, la libertad de cultos, con sus tristes consecuencias, que sea todo laico y civil, sin carácter religioso. Como si esto fuera el remedio de la gran crisis obrera y social, como si con esto se mejorara la condición económica del pobre obrero, que se vera miserablemente engañado, y por el que tanto se interesa la Iglesia, como demuestra el Papa Pío XI en su grandiosa Encíclica 'Quadragesimo anno', de Mayo último, en la que da normas rectas y eficaces para mejorar la situación de los obreros, y resolver los conflictos sociales en estos tiempos."

Esta situación era para el prelado "un cuadro muy triste y sombrío", por cuanto "Esta Patria querida, tan religiosa, parece que está siendo víctima de la tiranía sectaria, del furor de los ímproos". Para solucionarla sólo veía el camino de que los ríes hicieran actos de penitencia, reparación y desagravios contesando a Dios publicamente ya que "diría, utilizando esa terminología teórica y desvinculada de la realidad, criticada por lUSELL y con la que los obispos se referían en este periodo a la cuestión obrera" con la serviente piedad "Desarán los odios, venganzas y persecuciones y renacerá el culto con su esplendor, y se lomentarán las instituciones

(209) Ver sobre la cuestión social el epígrafe correspondiente de este capítulo.

católicas, cesando las perturbaciones entre las clases obreras y proletarias, y entre patronos y obreros, y llegara esa gran bonanza, que trae la gracia de Dios"; todo un programa de futuro, en definitiva, iruto, según el pensamiento del Dr. ALVAREZ, del arraigo del culto, con olvido, al parecer, de todo cuanto la Iglesia había dejado de hacer -y que otros prelados no se cuidaran de callar- y de la necesaria premisa, singularmente en el ámbito social, del conocido "a Dios rogando y con el mazo dando" o, dicho en otras palabras, del necesario y práctico actuar evangélico cerca de los más débiles socialmente.

Lejos de esta actitud, lo importante para el Dr. ALVAREZ era demostrar como la libertad que ahora venia a proclamarse era para muchos un pretexto para atacar la religión y "secularizarlo todo, quitando todo caracter religioso, rebajando así la dignidad del hombre, que reducen a la condición de un irracional...". Ante ello necesario era estudiar los fundamentos de la fe y practicar la oración a fin de pedir "por la conversión de los pecadores, y por el retorno de los protestantes y cismáticos al gremio de la Santa Iglesia; por el libre ejercicio de nuestra Santa Religión, y por todo lo demás, según dejamos expuesto"; programa, en fin, que, como vemos, volvía a encerrar a los católicos en un teórico mundo de defensa muy alejado de la práctica comprometida y viva que en aquellos momentos hubiera sido precisa.⁽²¹⁰⁾

(210) 13 de junio de 1931, "La enseñanza religiosa y la libertad de cultos", BOE de León, 15 de junio de 1931, núm. 10, pág. 247-269.

9. La actuación del cardenal Segura en el exilio.

9.1. Las primeras pastorales.

Ni la desorbitada expulsión decretada por el gobierno provisional ni el temperamental carácter del primado eran puntos de partida idóneos para esperar una reservada actitud por parte de este tras su destierro; su sentido de pastor de su provincia eclesiástica y aún de la Iglesia entera de España, eran acicate suficiente para que quisiera seguir estando presente, desde la lejanía, en cuantos asuntos pudieran atañer a una u otra.

Así, y tal como se infiere del contenido de la carta pastoral que suscribiera el 23 de junio en Lourdes, no bien acababa de cruzar la frontera y previamente a cualquier consulta con el Vaticano sobre la actuación a seguir, dirigirla desde dicha localidad dos cartas a sus fieles, cartas que no fueron publicadas en el boletín eclesiástico de Toledo pero que, por las alusiones que a ellas hacía, parecen de contenido estrictamente religioso con el fin de confortar a sus diocesanos en la separación. Tras ellas, y según narraba en la citada pastoral del día 26, había hecho rápido viaje a Roma para hablar con el Papa, entrevista que, al parecer, dió nuevos ánimos a su pluma porque en esta tercera carta, escrita a los ocho días de su expulsión, si bien predomina el carácter religioso de su contenido, ya se traslucce la actitud beligerante que el cardenal iba a adoptar, tanto por las expresiones que contenía como porque en ella disponía, "en uso de Nuestra autoridad pastoral," que

fuera leída en el templo primado "para testimonio público de Nuestra ofrenda sabatina a la Santísima Virgen."

Ya hemos indicado anteriormente la concurrencia de fieles y significado que tenían los sermones del cardenal en las sabatinas de la catedral de Toledo, parece así obvio que SEGURA deseaba expresamente que todos fueran conscientes de que nadie -salvo el Papa- podía lograr que su voz dejara de oírse, probable razón por la que, a diferencia de lo que había sucedido con sus dos cartas anteriores, esta no solo sería leída, como ordenaba, sino que también fue publicada en el boletín eclesiástico; así seguiría haciéndose desde entonces con el resto de documentos que dirigiría a los fieles.

Comenzaba SEGURA su primera alocución pastoral hecha pública desde el destierro refiriéndose a sus dos inéditos escritos anteriores y a su estancia en Roma para aludir seguidamente a la devoción mariana, no interrumpida "ni aun en los momentos de la ruda adversidad de la prueba", pues era en esas circunstancias cuando mayor era la confianza en quien "aplastó, aplasta y aplastará en todos los tiempos... la cabeza de la serpiente". Por ello deseaba el cardenal que sus dos cartas anteriores fueran expresión del afecto paternal que sentía hacia sus fieles, afecto que crecía con la separación "y que las muchas aguas de la tribulación no podran apagar".

Tras estas consideraciones pasaba SEGURA a referirse al tema de los ataques contra el pontificado para, en base a él, defender la incolumidad de la jerarquía eclesiástica frente a cualquier agresión terrenal y, así, aludir a su reciente visita a la catedral de Roma, la cual "cuando la tempestad arrecia y amenaza sacudir los fundamentos en que estriba la Iglesia Santa" era singularmente eficaz y confortadora: mas dicha tempestad, aunque pareciera llegada

la hora del poder de las tinieblas, en que el "naturalismo moderno en todas sus múltiples manifestaciones de impiedad" combatía sañudamente el pontificado, nunca podría prevalecer contra la Iglesia cuya nave seguiría siempre adelante.⁽²¹⁾

Reforzaba el sentido de esta pastoral la circular del Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO, obispo auxiliar y vicario general del arzobispo de Toledo, que se publicaba en el mismo boletín eclesiástico y en la que recomendaba a los fieles la lectura de la carta del primado a fin de que conocieran los sentimientos paternales que hacia ellos tenía, no sin antes hacer un panegirico de sus virtudes y aludir a "las armas innobles de la calumnia y de la injuria que se han empleado contra él", hechos que, al ser de todos conocidos, no precisaban demostrar la justicia de su causa ni efectuar nueva protesta por el agravio que se le había inferido. Tras pedir a los fieles una firme adhesión al cardenal y recordar las oraciones elevadas por los primeros cristianos con ocasión de la prisión de los apóstoles Pedro o Pablo, les instaba a orar igualmente, ya que "los designios de los hombres no pueden prevalecer contra los designios de Dios, que, en su sabiduría infinita, hallara los medios precisos para que, cuando llegue la hora señalada en su soberana providencia, resplandezca la verdad y triunfe la inocencia"; por ello, y al objeto de que se elevaran constantes preces por el primado disponía la celebración de una solemne fiesta eucarística y el rezo de oraciones en todas las misas, singularmente en las de los domingos, y en los restantes actos públicos de culto, forma idónea de

(21) 23 de junio de 1931, "Carta Pastoral de Su Emcía. Avona, sobre la confianza en la Oñra. virgen leída en la fiesta solemne que se celebró en la Catedral Arzobispal el día 4 de junio de 1931" BGE de Toledo año 67, 6 de julio de 1931, num. 13, págs. 129-130.

que los católicos de la archidiócesis no olvidaran la situación de su arzobispo.⁽²¹²⁾

A los efectos de este estudio mayor importancia reviste la carta pastoral redactada por el incansable cardenal el 4 de julio desde la que sería su residencia definitiva en "Nuestra Señora de Bel-lac" (Bayona) y en la que pretendía explicar a los fieles la postura que había mantenido hasta esa hora, lo cual hacía, precisamente, a los dos días de producirse una nueva descalificación oficial contra su persona, en un hecho que, si no trascendente, sí revelaba la publicidad que el gobierno quería dar a la consideración que le merecía el cardenal y que no deja de guardar relación con las quejas implícitas en esta pastoral: El ministro de Ilustración Pública había comunicado a los periodistas la firma de una orden dándole de baja en el escalafón del magisterio, en el cual figuraba como maestro honorario.⁽²¹³⁾

Se dividía este nuevo documento del primado en tres epígrafes: "Nuestro silencio", "Nuestra gratitud" y "Nuestro deber". En el primero quería justificar la premura con la que dejaba oír de nuevo su voz para tratar del tema de su expulsión y su actitud ante los ataques sufridos, basándose,

(212) 1 de julio de 1931, "Circular del Emmo. Sr. Obispo Auxiliar, Vicario General del Arzobispado", BGE de Toledo, año 87, 8 de julio de 1931, núm. 13, págs. 232-234.

(213) Este era el texto de la orden: "He tenido a bien disponer que el cardenal primado de España, arzobispo de Toledo, doctor D. Pedro Segura, sea dado de baja en el Magisterio nacional, en el que figuraba con la categoría extraordinaria de maestro nacional honorario", "El Sol", 3 de julio de 1931.

para ello, no en propias palabras sino en textos de los Santos Padres y, sobre todo y tal como habia hecho en su anterior pastoral, en el ejemplo dado por Pio XI con motivo de los ataques contra la Iglesia en Italia. Continuando de esta forma con esa necesidad suya de comenzar justificando este "continuo hablar" del que parece no ser consciente -con la que, como recordamos, tambien iniciaba su famosa pastoral de 1 de mayo- y amparandose para fundamentar sus palabras en textos ajenos, no dejaria, sin embargo de aludir, con frase propia, al imperativo de hablar porque asi lo apremiaba "la voz de la conciencia", al no serle posible callar "cuando peligran los sagrados intereses de la gloria de Dios y del bien de las almas que Nos estan confiadas" y ello aun cuando segun las conveniencias temporales fuera "preferible el callar en circunstancias como las presentes" y aunque sus labios hubieran estado dispuestos "a haber guardado perpetuo y absoluto silencio".

Al tratar de la gratitud debida en primer lugar a Dios, para lo cual citaba la bienaventuranza que encontraba acorde con su situacion ("dichosos sereis cuando los hombres, por mi causa, os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, proque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los Profetas que hubo antes de vosotros"), seguidamente a la Iglesia y, en general, a cuantos sacerdotes y fieles de su diocesis le habian expresado su adhesion, indicaba SEGURA que estaba lejos de su animo el hacer defensa de su persona por medio de su carta, si bien para apuntar seguidamente que su honor habia sido "por tantos medios ultrajado con toda suerte de calumnias y con apreciaciones y suspicacias tan injuriosas como en absoluto inmundadas". Tambien queria dejar bien claro el primado la auencia del papa para su

primer regreso a España y, así, al aludir a la forma en que había sido confortado en Roma tras su salida motivada por los incendios de mayo, se cuidaba de apuntar como el día 7 de junio fue a pedir "en conformidad con lo prescrito en el canon 238, párrafo 3, la licencia que necesitábamos para salir de Roma y volver a España, según lo teníamos determinado: licencia que Su Santidad Nos concedió benignísimamente". Tras referirse a la acogida que había recibido en el Vaticano por todos los miembros del Sagrado Colegio Cardenalicio, pasaba a hablar de la jerarquía española en unos significativos términos, ajenos a la opinión que, como hemos visto, tenían hermanos suyos en el episcopado de sus actuaciones y expresivos del juicio que sobre la cohesión de los obispos habían vertido las autoridades públicas españolas en sus declaraciones sobre la distinta actitud de unos y otros:

"Ignoran la verdad (no podemos suponer otra cosa) quienes han llegado a decir que hay divergencias de criterio y de conducta en el Episcopado español en los momentos actuales. Tenemos pruebas irrecusables de la unión estrechísima espiritual de todos Nuestros venerados Hermanos en el Episcopado, de los que hemos recibido y estamos recibiendo unánimes e inequívocas pruebas de afecto, de adhesión y de condolencia."

Hechas estas puntualizaciones quería también SEGURA dejar constancia del apoyo prestado a su persona desde todos los puntos de España y aun del extranjero y de los variados procedimientos seguidos para ello, a fin de que fuera de público conocimiento:

"... hemos visto, con singular consuelo, unidos en esta ocasión a tantos y tantos preclaros sacerdotes y fervientes católicos de toda España y aun del extranjero, que, con artículos vibrantes en la prensa, con sus cartas sentidísimas y

mensajes de adhesión fervorosa, han testimoniado en Nuestra persona su amor a la Santa Iglesia, nuestra comun Madre, en estos aciagos tiempos tan cruelmente perseguida por sus enemigos."

En el tercer epígrafe de la pastoral pasaba a tratar el primado de los deberes que, en razón de su cargo pastoral, pesaban sobre él en justa correspondencia con las gratitudes expresadas. Quería, en primer lugar, dar ejemplo de perdón a sus "enemigos" y de responder con beneficios "a sus persecuciones y con amor a sus odios", toda vez que preciso era ser dichoso cuando se presentara ocasión de atestiguar, con el apóstol: "Somos maldecidos y bendecimos, padecemos persecución y la sufrimos con paciencia, nos ultrajan y elevamos suplicas; somos, en fin, tratados como la basura y las heces del mundo y la escoria de todos", frases todas ellas alejadas de lo que iba a ser la "paciente" actitud de SEGURA que no dejaría de recordar, a renglón seguido, si bien con las oportunas palabras de condolencia, como habían caído en excomunión los que contra él habían atentado:

"Tristísima sobre todo y digna de lastima es la situación en que se encuentran principalmente aquellos que, arrastrados por su ceguedad, han incurrido en los anatemas de excomunión de la Iglesia, fulminados contra los que violan algunos de sus imprescriptibles derechos.

«Quiera el Señor, rico en misericordias, apiadarse de ellos, y tornarlos al camino del arrepentimiento que es el único que conduce a los pobres extraviados a la vida verdadera de la gracia.»

Tampoco quería el primado privarse de recordar como los poderes públicos le impedían cumplir sus deberes pastorales, cuyo peso -decía- sentía en aquellos momentos como nunca y a cuyo cumplimiento estaba obligado por un mandato del que solo la Santa Sede tenía competencia para eximirle;

pensamiento, este ultimo, sin duda, mas encaminado a resaltar el poder del Vaticano frente a toda intromision civil que a barajar la hipótesis de que esto pudiera un dia suceder, como revelaria toda la actuacion posterior del cardenal:

"Se trata de deberes sacratísimos, que sobre Nos pesan mientras la Santa Sede de ellos no Nos releva y que, en momentos tan apremiantes y criticos para el bien de nuestras almas, se Nos impide cumplir con la libertad y eficacia necesarias."

Por ello no dejaba SEGURA de elevar claramente su protesta por la situacion a que la autoridad civil le sometia y por la forma en que por dos veces -decia- se le habia hecho salir de España, pidiendo, en consecuencia ser reintegrado inmediatamente a su sede:

"Protestamos solemnemente ante Dios y ante vosotros, amadísimos Hijos, de la violencia moral y física con que se nos obliga a abandonarnos, en las dos ocasiones en que se Nos ha forzado a salir de nuestra querida Patria, y con que se Nos retiene fuera de ella; y reclamamos instantemente Nuestro regreso inmediato a Nuestra amadísima Archidiócesis."

Todo ello porque, anadia, deber pastoral suyo era procurar, en union del resto del episcopado, "la mayor gloria de Dios y el mayor bien de la Iglesia" mediante el adecuado cuidado de las almas que tenian encomendadas y porque "Bien seguros pueden estar quienes de Nos y de Nuestras intenciones recelan, de que jamas hemos pensado sino en el cumplimiento de los deberes de Nuestro sagrado ministerio, al tenor de las enseñanzas de la Iglesia", por lo que no podria aducirse en su contra una sola palabra o hecho que pudiera contradecir estas enseñanzas, bien

entendido que el reprobaba siempre, "con sinceridad apostólica", "cuanto, bajo cualquier régimen, se haya opuesto o se oponga a los derechos inviolables de Jesucristo y de su Iglesia".

Mas, para matizar estas palabras y reiterar su postura ante la República, quería el primado insistir, finalmente, en la doctrina eclesiástica del indiferentismo ante las formas de gobierno citando, para ello, palabras de León XIII, recogidas por Pío XI en la "Quadragesimo anno", y de la "Qui pluribus" de Pío IX, de las que subrayaba lo siguiente: "nadie puede violar sin hacerse culpable el precepto de obedecer a la autoridad a no ser que se mande algo que sea contrario a las leyes de Dios y de la Iglesia". Acababa, en fin, la pastoral con la cita de unas frases de la primera carta de San Pedro expresivas de su personal pensamiento ante la situación vivida, toda vez que si en ellas se recomendaba la sumisión a la autoridad civil, no dejaba de recalcar también que mediante el buen obrar se haría "enmudecer a la ignorancia de los hombres necios e insensatos", buenas obras que, en definitiva, debía basarse en el amor cristiano.⁽²¹⁴⁾

La inagotable pluma del cardenal y su innegable deseo de que no dejara de oírse desde el púlpito su pensamiento le hicieron escribir, casi inmediatamente, otra pastoral, ya en

(214) Nuestra Señora de Bel-lloc. 4 de julio de 1931, "Carta pastoral de Su Excelencia, Rvma, sobre los deberes del cargo pastoral", BDE de Toledo, año 67, 8 de julio de 1931, núm. 13, págs. 221-225. Esta pastoral fue publicada, igual que, como hemos visto, fuera la de 1 de mayo, por el boletín eclesiástico de la diócesis de Huesca bajo el expreso título "Documentos históricos" e indicando que estaba tomada del boletín de Toledo. No la hemos encontrado, sin embargo, en ningún otro de los boletines eclesiásticos consultados, siendo curiosa esta ausencia de la diócesis de Huesca respecto al cardenal SEBARRA al no existir antecedentes que puedan justificarla. BDE de Huesca, año 80, 1 de agosto de 1931, núm. 8, págs. 440-450. Por la duda que esta pastoral da sobre la actuación que iba a seguir el primado la incluimos íntegra en el apéndice. Ver el núm. 24.

este caso no tan centrada en su persona y con un mayor contenido religioso que, no obstante, giraba en torno al análisis de la situación de España y al juicio sobre sus "enemigos". Las alusiones que en este nuevo escrito hacia a las celebraciones religiosas de Toledo son prueba, por otra parte, de la constante comunicación que SEGURA mantenía con su archidiócesis.

Así, comenzaba la pastoral expresando su complacencia por la asistencia de los fieles a las famosas "sabatinas" por él instauradas, celebración que, decía, tenían "un carácter de unión estrecha entre el pastor y su grey y entre el padre y los hijos que, en las actuales circunstancias, la hacen no solo oportunísima, sino, hasta cierto punto, necesaria". Mas contra ella, añadía, habían surgido dificultades y "hasta insidias", las cuales era necesario "repeler con toda energía". "Se ha tratado con diversos pretextos de impedir esta reunión piadosa... presentandola como inoportuna en estos tiempos y tal vez como hasta peligrosa".

Esto, obviamente, no lo podía permitir el primado, las sabatinas eran cosa suya, unión como indicaba, entre el pastor y su grey; consentir en su desaparición era renunciar a una forma de afirmación diocesana ante el gobierno y, en cierta manera, contribuir a borrar su presencia en la vida católica de Toledo y, de ahí, la orden expresa para su celebración que contiene la pastoral, toda vez que el primado no quería permitir que esta celebración fuera ni siquiera sustituida por otra clase de cultos marianos y, así, diría con frases de infundados presagios:

"Queriendo, pues, prevenir los males que surgirían de toda medida, que modificase o suprimiese esta práctica, que la experiencia de largos años de Pontificado Nos ha demostrado provechosisima a las

almas, en uso de Nuestra autoridad venimos en disponer y mandar, como por la presente carta disponemos y mandamos, que la fiesta sabatina, alabada, bendecida e indulgenciada por Nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, siga celebrandose en Nuestro santo templo primado en la misma forma y a las mismas horas en que se ha venido celebrando desde que la instituímos en esa ciudad, que ha reportado ya de ella copiosísimos frutos."

Pasaba a justificar SEGURA, a renglón seguido, el por qué de la necesidad de la devoción mariana -aunque no, por supuesto, la de que la sabatina tuviera que seguir celebrandose y "en la misma forma y a las mismas horas"-, que radicaba en que era "inspiradora de aliento y de fortaleza en los momentos difíciles de la vida actual de la Iglesia Católica, y en especial de nuestra Iglesia española", ya que era la devoción a la Virgen la que había marcado "el nivel de nuestras grandezas patrias en el curso de toda nuestra historia", pues "España fue grande por su fe en aquellos días gloriosos en que era Reina absoluta de nuestros destinos nacionales la Santísima Virgen... constantemente honrada por todas las clases sociales de nuestro pueblo". Consustancialidad, pues, del trono y del altar como motor de la plenitud histórica de la nación, muy alejada -y por eso el interés de SEGURA en esgrimir esta alusión a los destinos nacionales- de la separación entre Iglesia y Estado a que se tendía, consustancialidad que, además, no solo traía la oportuna gloria a la nación sino toda una serie de bienes terrenales que, si aplicables a un conjunto social, que era la idea que el cardenal quería imbuir, parecen, en el plano individual, difícilmente conciliables con el espíritu evangélico:

"Nuestros padres, siguiendo el mandato de Nuestro Divino Salvador, "Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura", demandaban en primer término los dones sobrenaturales de la gracia por mediación

todopoderosa de la Virgen Madre, y Ella venia a demostrar con hechos gloriosísimos la verdad de la promesa de que todos los demas se les daban por añadidura: dominios, prestigio, honor, riquezas, bienestar, orden, paz."

Era interés del primado contrastar la vertiente que se iniciaba en aquellos momentos de laicización del Estado con las pasadas glorias patrias, mas no queriendo indicarlo abiertamente se referiria al contraste entre aquellos tiempos en que en España "no se ponía el sol" con los vividos a partir del momento en que fue debilitándose la devoción mariana, y en el que la nación "fue experimentando las consecuencias funestísimas de su propia debilidad, bajando rápidamente el nivel de nuestra grandeza al descender el nivel de nuestra devoción sincera, leal y verdadera a la Santísima Virgen". Argumentos todos ellos muy topicos en el discurrir eclesiástico si bien difícilmente justificables, aunque el primado los apostillara indicando que pocos momentos ilustraban "con luz tan clara como los actuales la verdad histórica de estas afirmaciones" y con las que queria concluir dejando bien claro que la falta de religiosidad solo podía conducir al decaimiento de un Estado.

Por todas estas razones era preciso, según SECURA, regresar a la devoción mariana en forma particular, pero "sobre todo colectivamente", en una celebración como era la sabatina que no solo habia de mantenerse en la archidiócesis sino que debería implantarse en todos los templos de España a fin de impetrar la ayuda divina mediante las oportunas plegarias, ya que "a Dios fácil le es dar la victoria a los

suyos prescindiendo del numero de enemigos. No olvidemos... que no es en los medios humanos en los que debemos poner nuestra exclusiva confianza, sino que el triunfo de la Iglesia, que desde luego podemos dar por descontado, viene del cielo..."

9.2. La carta a Alcalá Zamora.

Extremadamente fecundo debió de ser el pensamiento del cardenal el día 20 de julio de 1931, fecha en que aparecen datados distintos documentos de indudable trascendencia.

Fue el primero la carta que dirigió al presidente del gobierno provisional en réplica y comentario a la que este le enviara el 17 de junio contestando a la que el cardenal le remitiera el día 15 anterior desde su confinamiento en Guadalajara. En esta carta SEGURA volvía a revelar su idea de ser, aun desde el exilio, portavoz de toda la jerarquía española comenzando por expresar su queja por la, a su juicio, escueta y poco convincente contestación dada por ALCALA ZAMORA al "memorial de agravios" remitido el 3 de junio desde Roma para, seguidamente, declinar cualquier comentario sobre las alusiones del presidente a su pastoral

(219) Santa María de Bel-lloc, 8 de julio de 1931, "Carta Pastoral de Su Emcia. Rvda. sobre la fiesta sabatina en honor de la Sma. Virgen", BDE de Toledo, año 57, 23 de julio de 1931, núm. 14, págs. 243-245.

del día 1 de mayo y a lo que el gobierno calificaba como inesperado regreso del primado ya que, según decía, se había formado "el decidido propósito de no recoger ni una sola de las afirmaciones que con relación a mi persona contiene su mencionada carta. Dejo la justa apreciación de mis obras, de mis palabras y de mis intenciones al juicio de Dios". La adopción de esta actitud, que el cardenal autocalificaba de generosa y noble renuncia a su honra personal, no implicaba empero que por su parte dejara de seguir asumiendo la defensa de los intereses de la Iglesia.

"Mas, si puedo generosa y noblemente renunciar a mi justificación y defensa en todo aquello que ceda a mi perjuicio y en mi deshonra personal, no está en mi mano dejar pasar por alto cuanto recunde en daño de los sagrados intereses de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica."

Por esta razón añadía el cardenal que se veía en "la precisión de responder brevemente a V.E., no se fuera a interpretar mi silencio como conformidad con el criterio por V.E. emitido".

Mas si la brevedad del primado no resultaría tal, no dejaría de protestar, como hemos indicado, por lo parco de la respuesta de ALCALA ZAMORA al "memorial de agravios", documento que no había merecido "una contestación cual correspondía a la importancia del objeto de la reclamación y a la dignidad de la sagrada jerarquía de la Iglesia española" en cuyo nombre, como se ve, seguía hablando SAGURA, que especialmente se lamentaba de que en la carta del presidente no hubiera "una sola palabra de execración de los hechos que motivaron aquellas gravísimas palabras del Episcopado", frase con la que el cardenal se refería al

párrafo en que en su documento de 3 de junio había tratado de los incendios de iglesias y conventos, la reparación de los daños ocasionados y la protesta por los sacrilegios y profanaciones habidos en aquellas jornadas, el cual pasaba a transcribir nuevamente, para después proseguir con la queja general respecto de la ligereza con que el presidente había enfocado los restantes temas expuestos y concretamente enumerados en el memorial, tratando de desvirtuar la reclamación que se le había elevado, al indicar, en frase que el cardenal copia de su carta, que "algunos de los motivos de protesta eran conjeturas o rumor", afirmación que, decía SEGURA, era manifiestamente inconsistente, toda vez que tales motivos tenían su plasmación en disposiciones o notas oficiales lesivas de los derechos de la Iglesia como se desprendía claramente de la relación de los trece puntos contenidos en el párrafo número cuatro del documento de 3 de junio que, para confirmar su aseveración, SEGURA volvía a relacionar ahora, para detenerse singularmente en uno de los menos relevantes y que ALCALA ZAMORA mas había banalizado: la cuestión de la supresión de las cuatro órdenes militares, problema este al que ningún otro miembro del episcopado prestaría atención pero que, al parecer, para el primado revestía una trascendencia quizá basada con la vinculación que las cuatro órdenes tenían con la institución monárquica o por la simbología que encerraban no solo de la unión del trono y del altar sino también de la cruz y la espada, es decir, de lo eclesiástico con lo castrense. Para el cardenal, en todo caso, dicho proceder era inadmisibile por cuanto la existencia de dichas órdenes estaba amparada por el concordato de 1851 y porque, además, era cuestión exclusiva de la Iglesia, y desde luego no del poder civil. El juzgar si tales instituciones tenían o no "conexión actual con la espiritualidad religiosa", razón por la que el presidente debía reconocer que su frase alusiva a las "exterioridades honoríficas y debilidades aristocráticas"

que representaban las órdenes militares no debería en modo alguno haber figurado en su carta.

Mas con apoyo en el incumplimiento del concordato que esta y las demas iniciativas del poder civil suponía, pasara SEGURA a entrar en el tema central de su carta: la unilateral vulneración de aquél sin denuncia ni acuerdo con la Santa Sede. No obstante, antes de referirse a ello y como introducción a esta parte de su escrito, querrá considerar la razón dada por el presidente para justificar unas medidas del gobierno tan lesivas de los derechos de la Iglesia en general y del tratado suscrito en particular. Tales medidas, había dicho en su escrito de 17 de mayo, se reconocían en el Derecho político moderno, como propias del poder civil. ¿Que quería decir el presidente con estas palabras que tan graves podían ser para los católicos? Si al aludir al "Derecho político moderno" se refería, como parecía, "al Derecho llamado nuevo, basado en los principios del naturalismo,"⁽⁴⁰⁾ proclamado por la revolución", no debía ignorar que tal Derecho estaba "positiva y terminantemente condenado por la Iglesia"⁽⁴¹⁾ que, como había expresado Pío IX en la encíclica "Quanta cura", proscribía el principio que determinaba que el progreso civil exigía el gobierno ajeno a la religión, como si esta no existiese, o sin distinguir entre la verdadera y las falsas, condena que había sido reiterada en numerosos documentos pontificios, tales como el "Syllabus", la "Inmortale Dei" o la "Libertas". Era obvio, desde luego, que ALCALA CAMOÑA había querido fundamentar la actuación de su gabinete en el dere-

cho imperante en las democracias occidentales, acorde con la filosofía de la laización del Estado que SEGURA venía a recordarle que la Iglesia proscribía; el cardenal, no obstante -y para cuidarse de dar por sentada una posibilidad ante la que la jerarquía española pocas armas argumentales podía utilizar sin contar con un respaldo masivo de ciudadanos que, siguiendo, por creyentes, los principios teóricos eclesiásticos, hipotéticamente pudieran oponerse a esta concepción de la sociedad civil- quería abrir una puerta de reflexión que, rechazando la posibilidad apuntada, pudiera suponer aun una vía de entendimiento: quizá el presidente al tratar del "Derecho político moderno" se había querido referir tan solo al nuevo régimen español: en tal caso procedente era recordar con León XIII que la Iglesia no rechazaba ninguna forma de gobierno, pero exigía de todas ellas "que en especial respeten integros los derechos de la Iglesia",¹¹⁷ respeto que, de acuerdo con la exposición anterior, implicaba en sí, como primera premisa, la imposibilidad de concebir un Estado desvinculado de la religión.

Hechas estas reflexiones y sin clarificar cual de las dos posibles acepciones apuntadas elegía (aunque es obvio que sólo podía asumir la forzada interpretación que había dado en segundo lugar), procedería el cardenal a apoyarse en el concepto esgrimido por el presidente para añadir -obviando ahora todo argumento de tipo eclesiástico y descendiendo a postulados puramente temporales, que quizá el mismo debía entender mas convincentes para todos al querer así aducirlos- que, en todo caso, no podía haber "verdadero Derecho político moderno" que proclamara que no había

(117) En bastardilla en original.

"obligación de guardar los pactos legitimamente establecidos", por lo que era en esta cuestión "donde no ya los católicos, sino los hombres de leyes, y aun los hombres de Gobierno, deben reconocer que en las disposiciones que han motivado las reclamaciones interpuestas se ha traspasado el límite de lo legal", por lo que mientras subsistiera el concordato vigente -y no constaba que hubiera sido válidamente derogado- debían quedar sin vigor "todas las disposiciones ministeriales que a él se opongan".

Para demostrar las transgresiones habidas, que, como decía el cardenal, implicaban la nulidad de las disposiciones gubernamentales dictadas, pasaba a reproducir aquellos artículos del concordato que más frontalmente habían sido vulnerados: el reconocimiento de la religión católica como la única posible en España; el compromiso de la enseñanza religiosa de la juventud; el respeto a la actuación de los prelados y sacerdotes y aun la colaboración precisa con su labor de defender las buenas costumbres y, por último, el reconocimiento de su libertad en todo lo atañente a la autoridad eclesiástica y al ministerio sacerdotal.

El primado acababa su carta haciendo dos ruegos a ALCALÁ ZAMORA que estimaba "de estricta justicia", el primero era de carácter general: "que en cuantas cosas se relacionen con los derechos de la Iglesia se obre de acuerdo con la Santa Sede", el segundo era de índole personal y basado en las necesidades de la archidiócesis de Toledo, en los intereses que, decía, le estaban confiados como primado de España, y en sus deberes de Director pontificio de la Acción católica, por estos tres motivos pedía el cardenal que se le permitiera el libre regreso, a fin de "continuar, por medio del cumplimiento de mis deberes, laborando por el

bien de la Iglesia y de la Patria".⁽²¹⁸⁾

9.3. Las directrices al episcopado.

Otros documentos que, también fechados el 20 de julio, de 1931 enviaría el primado en aquellos días eran los ejemplares de dos relevantes circulares remitidas a los metropolitanos españoles y que estos debían hacer llegar a sus respectivos sufragáneos.⁽²¹⁹⁾ Trataba la primera

(218) Nuestra Señora de Bel-lloc, 20 de julio de 1931. "Carta de Su Eclesia, Roma, al Sr. Presidente del Gobierno provisional de la República", BOE de Toledo, año 87, 23 de julio de 1931, núm. 14, págs. 237-242. También la prensa daría noticia del envío de esta carta, así lo hacía "El Sol" el 6 de agosto de 1931 y, como indican Batllori y Arbeloa, el "Diario de Barcelona" en igual fecha (*Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 74, nota 10). Al ser esta carta el primer ejemplo del protagonismo que SEGURA quería seguir ejerciendo desde el exilio y clara muestra de su airado enfrentamiento con el gobierno incluiremos sus partes más sustanciales en el apéndice. Ver el núm. 25.

(219) Así se desprende de la carta que igualmente con fecha de 20 de julio acompañaba a los ejemplares remitidos a VIDAL y en la que SEGURA expresaba que lo hacía por persona de su "absoluta confianza", utilizando este procedimiento "modestísimo y costoso" en razón de la gravedad de las cosas que en las circulares se trataban (*Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 152-153).

circular ("numero V.- "Confidencial") de la necesidad de que el episcopado mantuviera el principio de no intromisión del poder civil en la administración de los bienes eclesiásticos a fin de garantizar "la independencia que es necesaria a la Iglesia para su regimen y gobierno". De entre estos bienes destacaba el llamado "Fondo de Reserva" que, segun el concordato, habia de quedar a disposicion de los prelados para los fines que determinaba; de lo que claramente se desprendia, segun SEGURA, que su administracion se confiaba unicamente a los obispos, no rijandoseles obligacion alguna "de rendir cuentas ni de facilitar noticias... al poder civil",²²⁰ interpretación que, añadia, tambien debia haber dado este "por cuanto ningun gobierno... reclama hasta ahora intervencion alguna en esta materia". La defensa de tal competencia no podia entenderse, por otra parte, como deseo de eludir responsabilidades, dado que la Santa Sede podia pedirles siempre cuentas de su gestion, siendo a ella a

(220) El artículo 37 del concordato, al tratar del fondo de reserva, no fijaba, en efecto, tal obligacion, simplemente no aludia a ello, indicando únicamente que este fondo estaba a disposicion del ordinario; de ahi que el cardenal quisiera con esta circular que todos los obispos dieran la misma interpretacion al precepto y adoptaran la misma postura ante cualquier posible interferencia del poder civil, si bien no dejaba de finalizar su escrito indicando que si el resto del episcopado tenia otra opinion se uniria a ella, pues en esto "como en todo" no pretendia "sino acertar".

Lo regulado por el citado artículo era lo siguiente: "Asimismo, de las rentas que se devenguen en las vacantes de dignidades, canonicas, parroquias y beneficios de cada Diócesis, deducidas las respectivas cargas, se formará un cúmulo o fondo de reserva a disposicion del Ordinario, para atender a los gastos extraordinarios e imprevistos de las Iglesias y del clero, como tambien a las necesidades graves y urgentes de la Diócesis. Al propio efecto ingresará igualmente en el mencionado fondo de reserva la cantidad correspondiente a la duodécima parte de su dotación anual, que satisficran por una vez dentro del primer año los nuevamente nombrados para prebendas, curatos y otros beneficios; debiendo, por tanto, cesar todo otro descuento que por cualquier concepto, uso, disposicion o privilegio se hiciese anteriormente". (TIERNO GALVAN, Enrique, *Leyes politicas españolas fundamentales (1808-1936*, Madrid, 1968, págs. 509-510).

quien correspondia determinar si en algun caso, y por su conducto, era conveniente informar al poder publico sobre la inversion de dicho fondo; tal postura no podria entenderse, segun el primado, como desacato u hostilidad hacia dicho poder, con el que el episcopado deseaba colaborar en bien de la patria.¹²²¹

La otra circular ("numero VI.- Personal y reservadísimo") constaba de seis apartados y en ella comunicaba SEGURA a todos los obispos: a) las facultades extraordinarias otorgados por la Santa Sede al episcopado, dadas las circunstancias que atravesaba la Iglesia española, y mientras estas perdurasen, respecto a la disposicion de los bienes eclesiásticos, ya fueran diocesanos o de las ordenes religiosas, y respecto a las dispensas que podian conceder a los miembros de dichas ordenes. Estas facultades, concedidas segun el primado a instancia suya durante su viaje de mayo a Roma, eran las ya anunciadas por el en su circular numero cuatro de 10 de junio; b) la remision de los informes evacuados por el letrado asesor¹²²² y por "las personas mas

(221) *Iglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 153-154.

(222) Todos los miembros del episcopado abonaban una cuota anual para sufragar los honorarios del letrado que les asesoraba en cuestiones de índole jurídica, cuotas que se centralizaban en el arzobispado de Toledo y que tras el exilio del cardenal SEGURA pasaron a recaudarse por el arzobispo de Tarragona, probablemente a raíz de la conferencia de metropolitanos celebrada del 18 al 20 de noviembre de 1931 en cuya acta, no obstante, solo consta el acuerdo de continuar abonando dichos honorarios. El letrado asesor de la jerarquía era el propagandista Rafael MARÍN LAZARO (Op. cit. I, pág. 46, nota 7; II, págs. 116; 194-195 nota 1.; 248; 254; 267; 261; 264 y 600; III, págs. 438; 442; 453; 462; 463; 487-488; 491-492; 500-501 y 502-503).

técnicas en la materia"⁽²²³⁾ sobre la seguridad de los bienes de la Iglesia, que respondían, concretamente, a las siguientes consultas:

- 1º Modo de sacar a salvo en las circunstancias actuales los valores pertenecientes a la Iglesia y a las instituciones eclesásticas.
- 2º, Modo de librar de peligro en estas circunstancias los bienes inmuebles propios de la Iglesia y de las instituciones eclesásticas.
- 3º. Modo de poner las cuentas corrientes de la Iglesia e instituciones eclesásticas fuera del alcance de todo peligro.

(223) Los editores del archivo del cardenal VIDAL indican que no han hallado este segundo informe evacuado por otros técnicos publicando, en consecuencia, únicamente el del letrado asesor (*Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 156, nota 3).

Aunque BATLLORI y ARBELDA no alucan a esta hipótesis es posible que el cardenal VIDAL destruyera este segundo informe por su contenido, dado que SEGURA apuntaba en su Circular la conveniencia de que, una vez conocidos, todos los documentos que enviaba fueran cuecados "en forma que no pudieran comprometer", consejo que reiteraba especialmente al referirse a los informes sobre el destino a dar a los bienes de la Iglesia: "no hay que decir la trascendencia que tiene el que estos informes puedan venir a caer alguna vez en manos extrañas; llegaría a producir funestísimos efectos. Urge, por lo tanto, el que de un modo especial estos informes se inutilicen inmediatamente, ya que en el caso de una inspección pudieran servir de orientación a los enaigars para accions persecutorias de la propiedad de la Iglesia".

El que a pesar de estas recomendaciones la mayoría de los documentos remitidos por el primado permanecieron en el archivo del cardenal de Tarragona es explicado por los citados editores por la publicidad que seguramente se dio a todos ellos, por lo que el cardenal VIDAL no se creía en la obligación de destruirlos. Ni ellos mismos "afecten" se sienten "en el deure d'eliminar-los d'aquest recull documental" (op. cit., I, pág. 155, nota 3).

A la causa de la publicidad de estas circulares de SEGURA y de los anexos que las acompañaban nos referiremos mas adelante, en el epígrafe relativo a la detención del Sr. ELLERRE.

42. Cual será el empleo más seguro del capital en las circunstancias actuales o presentes.²²⁴⁾

c) Las cautelas a adoptar en las comunicaciones entre los obispos y en las de estos con el mismo, a fin de garantizar la necesaria seguridad; d) La conveniencia de realizar una nueva reunión de metropolitanos, una vez se conociera "el sesgo que tomaban las cosas de España" vencida la labor de las Cortes constituyentes, a fin de "tratar entonces de las normas que fuera necesario establecer para una acción común"²²⁵⁾; e) La oportunidad, en su caso, de enviar un documento colectivo a las Cortes constituyentes pidiendo el respeto de los derechos de la Iglesia violados por las disposiciones del gobierno, así como de publicar otro dirigido a los fieles. Sobre estas dos cuestiones debían de pronunciarse los obispos, comunicándole, en el segundo caso, si su respuesta era afirmativa, qué puntos estimaban debían

(224) Como hemos recogido anteriormente, el acuerdo de transmitir a todos los obispos el informe de MARIN LAZARD en que se daba respuesta a estas consultas fue adoptado por la conferencia de metropolitanos de 9 de mayo anterior con la indicación de que los prelados debían atenerse, no obstante, a las instrucciones que sobre esta cuestión pudiera dar la Santa Sede que, como hemos dicho, dejaba ahora libertad de actuación. (Ver la nota 88 de este capítulo).

(225) Es esta la primera referencia del episcopado que conocemos sobre la necesidad de una acción común ante la nueva constitución, referencia motivada porque el día 6 de julio la Comisión jurídica asesora encargada de su redacción había presentado al ministro de Justicia el texto del anteproyecto. Tal anteproyecto fue publicado por la prensa el día siguiente, día en que también sería rechazado por el Consejo de ministros (op. cit., I, pág. 164, nota 3). Las primeras andaduras de la labor que había de culminar en la Constitución de la República y las previsiones sobre el calendario de debates de las Cortes, hacían estimar al primado que la orientación definitiva que adoptaría su articulado podría conocerse en el mes de octubre por lo que pedía a los prelados que pensarán en los temas a tratar en la reunión a celebrar en esas fechas, reunión que sería presidida, si para entonces él aún no había podido regresar y a no ser que indicara otra cosa la Santa Sede, por el arzobispo más antiguo.

ser tratados y en que forma sería procedente publicarlo;⁽²²⁶⁾ f) la necesidad de que todos los prelados le comunicaran su parecer sobre la precisión de recibir más orientaciones de la Santa Sede -aunque esta, en principio, no juzgaba necesario enviar nuevas instrucciones- indicando, en caso afirmativo, sobre qué extremos debían versar estas.

Acompañaban a esta circular tres anexos: el primero contenía las facultades concedidas por la Santa Sede a todos los obispos españoles en punto a disposición de los bienes eclesiásticos, por ellas podían acordar su libre venta (mediado el consentimiento del consejo de administración de la diócesis y del consejo del capítulo catedralicio), tanto se tratara de bienes muebles como de inmuebles y proceder a la inversión en títulos de deuda pública a conservar en lugar seguro, ya fuera dentro o fuera de España; también se concedía la disposición sobre determinados fondos y sobre las fundaciones eclesiásticas a fin de proveer al sustento del clero, singularmente si el Estado suprimía la dotación presupuestaria para este fin.⁽²²⁷⁾ El segundo anexo contenía las facultades concedidas respecto a las dispensas que podían otorgar a los miembros de las órdenes religiosas sobre determinadas obligaciones de sus respectivas reglas (vivir en casas particulares, rezo del oficio divino, ayuno y abstinencia, votos de pobreza y obediencia...), y también la de enajenar, con el consentimiento escrito del capítulo del monasterio propietario y del consejo de administración

(226) El documento colectivo a las Cortes constituyentes nunca fue enviado; sólo las provincias eclesiásticas de Tarragona y Sevilla elevaron un mensaje sobre el futuro texto constitucional (ver el capítulo sobre la Constitución). La única carta colectiva del episcopado fruto de estas ideas de SEGURA fue la que apareció fechada el inmediato 25 de julio dirigida a los fieles; más adelante trataremos de las anomalías de este documento.

(227) Ver el apéndice sobre el presupuesto de culto y clero.

de la diócesis, cualquier bien mueble o inmueble de las órdenes religiosas y la de invertir en títulos de deuda pública asegurando su custodia ya fuera dentro o fuera de España. El tercer anexo, por último, contenía los informes emitidos sobre la seguridad de los citados bienes de acuerdo con las cuatro preguntas antes expresadas.⁽²²⁸⁾

Mientras el primado se dedicaba a redactar estas circulares el cardenal VIDAL se encontraba en Roma, donde se había desplazado el 17 de julio para, según ya expusiera en la carta al cardenal PACELLI de 27 de junio, "consultar algunas cosas e ir mejor orientado" o, como abundaba en la que remitió al cardenal ILUNDAIN el mismo día de su llegada al Vaticano, para "esclarecer dudas en las presentes circunstancias, a fin de saber a que atenernos". Desde Roma VIDAL escribió también a SEGURA el mismo día 20 en que este fechaba los documentos que remitía al episcopado y en su carta, a diferencia de lo que había hecho en las que acabamos de citar, se limitaba a indicarle que su viaje era "para dar cuenta a la Santa Sede de las cosas de Cataluña, sin olvidar las de España"; en esta carta, tras mostrarle su condolencia por el destierro, darle cuenta de la protesta que por ello y por las disposiciones dictadas había elevado al presidente del gobierno, informarle de que se había enterado de las facultades pedidas, que pensaba comunicar enseguida a sus sufragáneos, e indicarle su deseo de entrevistarse con él discretamente en el sur de Francia, le hablaba precisamente de dos de las cuestiones a que se refería SEGURA en la circular num. VI: la necesidad de contacto entre los metropolitanos y la conveniencia de tomar alguna

(228) *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 155-161. La relevancia de estos documentos nos hace incluirlos en el apéndice. Ver el apéndice núm. 26.

iniciativa ante el proyecto de constitución en defensa de los derechos de la Iglesia.

Las ideas de VIDAL sobre estos dos puntos diferían, sin embargo, de las del primado: respecto al primero en lugar de dar continuidad a las reuniones de metropolitanos bajo la presidencia del arzobispo de Toledo o, en su defecto, bajo la del de mayor antigüedad, el arzobispo de Tarragona era partidario de una fórmula más sencilla y eficaz, de forma que sólo tres o cuatro de los metropolitanos estudiaran, mediante contactos frecuentes, los caminos a seguir comunicando su parecer a los restantes arzobispos y sus sufragáneos, idea esta con la que el cardenal comenzaba a perfilar su diseño de las reuniones de metropolitanos que más tarde plasmarían en el "Ufficio di Presidenza"; ⁽²²⁹⁾ en cuanto a la segunda cuestión estimaba que no debía realizarse ninguna actuación colectiva sino que esta había de ser, en todo caso, por provincias eclesiásticas -"así revestirá más espontaneidad y no es tan fácil culpar a la Santa Sede o a quienes toman la iniciativa"-, si bien los metropolitanos debían comunicarse las distintas actuaciones emprendidas o que pensaran emprender para que existiera la debida unidad dentro de las singularidades de cada provincia. ⁽²³⁰⁾

A esta carta contestó SEGURA de forma inmediata -el 26 de julio- dándole cuenta del envío de la circular con las facultades concedidas e indicándole su parecer de que hasta que no se conociera el proyecto oficial de la constitución

(229) Ver la primera exposición de VIDAL sobre los acuerdos y reuniones de metropolitanos, tendente a eliminar la primacía que pudiera atribuirse a uno de ellos, en la nota 107 de este capítulo. Frente a la reunión de todos ellos a igual nivel el arzobispo propugna ahora, por mor de agilidad y eficacia, la formación de un grupo más reducido.

(230) Op. cit. I, págs. 93; 150 y 151.

no convenia "tomar posiciones" ya que, por un lado, sus reclamaciones debian ir "sobre seguro", por lo que no podian fiarse de lo que decian los periódicos ni obrar con precipitacion, y, por otro, todos los puntos que en ella interesaban al episcopado estaban subordinados a la existencia de un concordato que regulara las relaciones entre la Iglesia y el Estado, aunque lo que se decia en la prensa sobre esta cuestion era oficioso; "..." contra la opinion de VIDAL le informaba de que cuando el habia estado en Roma "se mostraron conformes con que convendria evitar mucho las divergencia que se notaron con motivo del acatamiento a la Republica en los escritos de los Hermanos, para cuyo fin juzgaban preferible los documentos colectivos", "..." aunque si este parecer habia variado el aceptaria cualquier indicacion sobre el modo de elevar protestas o de dirigirse al pueblo. SEGURA acababa su carta apuntando el sitio que estimaba mas idóneo para mantener una entrevista. "..."

-
- (231) Indican BATLLORI y ARBELLOA que, al parecer, SEGURA aludia a los rumores de un acuerdo entre la Republica y la Iglesia basado en un "Estatuto de relaciones entre la Iglesia y el Estado" preparado por la misma Comisión jurídica asesora que habia redactado el anteproyecto de constitución. Por nuestra parte hemos de indicar que tal noticia habia aparecido, en efecto, en "El Sol" de 5 de julio de 1931, señalando que, segun comunicaba el Sr. Ossorio, estaba terminado el proyecto de la Constitución y añadiendo que parecia que estaba terminado o por terminar el proyecto del referido Estatuto. Los citados editores añaden que el presidente de la Comisión jurídica y de la subcomisión que preparaba este Estatuto, Angel OSSORIO y GALLARDO, publico una nota en la prensa ("El Sol", 24 de julio de 1931) criticando la inoportunidad e inexactitud de ciertos comentarios sobre el proyecto pues en aquellas fechas el Estatuto no estaba todavia terminado y el proyecto habia de presentarse al pleno de la comisión jurídica. (Op. cit., I, pag 165, nota 1). Sobre lo prematuro de estas noticias tambien informaria a la Santa Sede en una conversación con el Secretario de Estado, el encargado de asuntos de la República española ante el Vaticano Gómez Utrera (Op. cit., I, pag. 180, nota 1).
- (232) Los editores del archivo del cardenal VIDAL destacan aqui que la pastoral mas divergente habia sido la del propio cardenal SEGURA de 1 de mayo. (Op. cit., I, pag. 165, nota 3).
- (233) Op. cit., I, pags. 164-165.

No deja de llamar la atención, e incluso da lugar a pensar en una sibilina actuación del primado, el hecho de que no hiciera referencia alguna en esta carta al documento colectivo que, ante el proyecto de constitución, iba a salir de su pluma con fecha 25 de julio, es decir, un día antes de la carta que enviaba al arzobispo de Tarragona. Sea cual fuere la fecha real de ese documento y pensando, incluso, que fuese redactado posteriormente, no parece aventurado imaginar que el cardenal SEGURA ya lo tenía preparado, al menos en sus líneas maestras, por lo que destaca su improcedente silencio y su posterior actuación, a la que más adelante nos referiremos.

Más, aun sin conocer este proyecto del primado, el cardenal VIDAL no dejaba de desaprobair la actitud de protagonismo que quería seguir manteniendo desde el exilio como lo demuestran las críticas por su actuación que hacia al nuncio en la carta que, en contestación a la recibida de él con fecha 27 de julio tratando de las acciones a emprender ante el proyecto de constitución, le enviara el 1 de agosto. En esta carta, referida esencialmente a dicho proyecto, "..." VIDAL le exponía la necesidad de que conociera las dos últimas circulares remitidas por SEGURA, por lo que le indicaba que las pidiese al obispo de Madrid, y hacia un expresivo comentario sobre el proceder de aquel y sobre la fuente de la que extraía sus criterios:

"Como si no hubiese pasado nada, se ve que con frecuencia escribe a Roma; sospecho que muchos de los informes que recibe son de buena gente, pero integrista."

(234) De estas dos cartas tratamos en el capítulo sobre la Constitución. Ver el epígrafe 2. "La actuación a seguir ante el anteproyecto de constitución"

Aparte de informar al nuncio de que había expuesto a la Santa Sede su idea sobre la forma de organizar la dirección de la acción común (sufragáneos con metropolitanos; metropolitanos; grupos de tres metropolitanos de las provincias eclesiásticas colindantes) y la precisión de que esta fuera acordada con el nuncio, VIDAL insistía a TEDESCHINI en la necesidad de acabar "con ese dualismo aparente", pues si era lógico que en Roma desearan tener información completa veía muy difícil "que desde Francia sea posible ponerse en relación fácil y reservada con V.E. y con los Prelados", como lo demostraba la fecha y forma de llegar de las dos circulares, a lo que se unía, añadía VIDAL con gran clarividencia, "el grave inconveniente de que se entere de ello el Gobierno".

Abundando en el tema del cardenal SEGURA y dando una prueba más de sus discrepancias con él, indicaba VIDAL que el Secretario de Estado vaticano le había manifestado el deseo de que visitara al primado, informándole el que ya le había escrito en tal sentido; la respuesta de SEGURA, que el arzobispo de Tarragona ahora comentaba, le había llenado, no obstante, de perplejidad ya que, frente a la discreción propuesta por él el primado había elegido un convento de religiosas en Tolouse, elección que hacía que su visita no pudiera pasar desapercibida, "lo cual se prestaría a comentarios y compromisos".

El arzobispo de Tarragona, como se ve, estaba en desacuerdo con todos los pasos del primado y este desacuerdo y el empeño de aquél de continuar dirigiendo la Iglesia española, le hacían concluir su carta con dos concretas y contundentes cuestiones:

"Pregunto: ¿que harán los sufraganeos si notan alguna discrepancia entre su respectivo Metropolitano y el de Toledo? ¿La Santa Sede le ha dado facultades especiales para dirigir a los Prelados todos?"⁽²³⁵⁾

No se limitaría el cardenal VIDAL a exponer sus quejas al nuncio, la desfavorable impresión que le había causado la recepción y el contenido de las circulares de SEGURA vuelve a desprenderse del párrafo, subrayado, con el que finalizaba la carta que, también por aquellas fechas, escribió al cardenal ILUNDAIN:

"Supongo habrá recibido la documentación cursada por nuestro Hermano. Tengo muchas ganas de ver a V. y cambiar impresiones sobre el particular, pues me preocupa seriamente la orientación que llevemos, y no sé si se hacen perfecto cargo de la realidad."⁽²³⁶⁾

No era, sin embargo, el arzobispo de Tarragona el único en desaprobare la actuación del primado, mucho más duras que sus palabras serían las escritas por el nuncio en contestación a sus comentarios de 1 de agosto en una carta cuyas primeras frases parecen contener un severo juicio sobre el cardenal SEGURA, toda vez que FEDESCHINI agradecía en ellas a VIDAL la forma con que respecto a él se había portado en Roma, de acuerdo con "la justicia" y "la verdad", lo que sin duda le reportaría "el consuelo de saber que coopera eficazmente a aliviar los males de la Santa Iglesia y a reparar los daños que de imprudencias y ambiciones estamos

(235) Op. cit., I, págs. 171-173.

(236) Op. cit., I, págs. 181-182. En bastardilla en el original.

padeciendo".⁽²³⁷⁾ Sentada esta dura opinión el nuncio pasaba a informarle de lo "delicado y peligroso" que era para él pedir las dos circulares de SEGURA al obispo de Madrid,

"...porque ello daría ocasión antes de todo a que los Obispos supieran que el cardenal de Toledo descuida a la Nunciatura; y además sería para mí ocasión de tal naturaleza que, hablando de las circulares y del papel que el Señor Cardenal Segura se atribuye, yo no podría menos de desaprobare y condenar su obra como una intrusión en la misión del Nuncio, y como causa de un dualismo que yo no debo admitir mientras esté al frente de esta Nunciatura, y que es ciertísimo que tampoco la Secretaría de Estado puede ver con buenos ojos, y sin abierta reprobación."

Estas palabras tenían relación con la pregunta que VIDAL le hacía sobre si la Santa Sede había dado al primado facultades especiales para dirigir a todos los prelados; nadie mejor que el propio VIDAL debía saberlo, pues, si así hubiera sido, le habrían informado durante su estancia en el Vaticano y, además, la Santa Sede se lo habría comunicado a él mismo, a quien, precisamente, había otorgado las facultades sobre disposición de bienes eclesiásticos que el cardenal SEGURA había anunciado en su circular número cuatro y que incluía como anexo a su circular número seis, habiéndose procedido así no porque faltara el primado, sino porque él mismo hizo notar a la Santa Sede "la oportunidad

(237)

A su regreso de Roma VIDAL había escrito el 28 de julio otra carta a TEDESCINI informándole de que allí había procurado orientarlo todo según habían tratado ambos en el encuentro que tuvieron en mayo en Madrid y que el Secretario de Estado le había hablado en términos muy laudatorios de él, a lo que VIDAL añadía su opinión de cómo convenía que en aquellas circunstancias tuviera "el apoyo necesario y el mayor prestigio para alcanzar el completo éxito en su gestión, que resulta muy espinosa". (Op. cit., I, págs. 167-168).

de concederlas o al Episcopado o al Nuncio Apostolico".⁽²³⁸⁾

"Ademas, como bien sabe V. Emcia., la tendencia a dirigir el Episcopado todo, y a transmitir instrucciones de la Santa Sede, no es en la persona de que hablamos cosa de hoy, sino bien anterior; y las instrucciones que la misma persona se ha permitido transmitir, dando lugar al deplorable dualismo por V. Emcia. notado, no eran ~~mas~~ que instrucciones dadas confidencialmente para el, y no para que el se molestara en comunicarias al Episcopado; tanto ~~mas~~ que muchas de las dichas instrucciones, o, mejor dicho, todas fueron dadas tambien al Nuncio para cuando hicieran falta o por si creyera que hubiese necesidad de comunicarias; por ejemplo, las referentes al Concordato, el cual, como V. Emcia. bien comprende, es tal tema que no puede no estar reservado de la manera ~~mas~~ inequivoca y absoluta a la Nunciatura Apostolica."

Por todas estas razones el nuncio pedia a VIDAL que el mismo le remitiese las circulares, lo que le evitaria "tener que hablar de cosas que pueden despertar admiracion en algun Prelado, o crear escandalos que puedan trascender a los

(238) Como se ve tanto el primado como el nuncio reivindicaban el protagonismo de haber solicitado a Roma la concesión de las facultades extraordinarias. Sobre esta cuestión sólo podemos decir que con fecha 13 de julio, es decir, transcurrido un mes del regreso de SEGURA de Roma y de su circular numero cuatro anunciando la concesión de las facultades, habia escrito TEDESCHINI a VIDAL (y es de suponer que a todos los metropolitanos) comunicándole que el Vaticano habia otorgado a la nunciatura "especialísimas facultades para el mas pronto despacho de asuntos ordinariamente reservados a la Santa Sede", (Op.cit., I, págs. 123-124). Ello evidencia que Roma habia utilizado, como en otras ocasiones, el doble canal de comunicación, pasando el primado a interpretar segun una costumbre que TEDESCHINI denunciaba, que a el correspondia transmitir la noticia al resto de los prelados, competencia que el nuncio defendia como propia.

fieles". (239)

9.4. Las últimas pastorales.

Entre los documentos ya aludidos que el cardenal SEGURA fechó el día 20 de julio figura, por último, una pastoral destinada a los fieles de Toledo que no dejaba de guardar íntima conexión con los puntos que había tratado en los escritos suscritos en aquella misma fecha, pues llevaba por título, precisamente, "Sobre los derechos de la Iglesia", claro e inmediato ejemplo de que el primado estaba firmemente decidido -como había expresado a ALCALA ZAMORA- a continuar, a pesar de todo, en su actitud beligerante en defensa de tales derechos.

Constaba la pastoral de una breve introducción en la que el primado insistía en que era deber de su cargo la defensa de la integridad de los derechos eclesiásticos e instruir a los fieles "acerca de esta parte importantísima

(239) Op. cit. I, págs. 183-185. Para Jesús IRIBARREN esta carta es expresión de la práctica ruptura del cardenal SEGURA con el nuncio. IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, Madrid, 1974, pág. 37, nota 52. Una visión periodística sobre las agrias relaciones entre el nuncio y el primado puede encontrarse en la obra de Ramón GARRIGA, *El cardenal Segura y el Nacional-Catolicismo*, págs. 114-119, donde, además de dar una variada información, el autor analiza el relato que, apoyándose en la obra de "Juan de Iturralde" (Juan de Usabiaga), *El catolicismo y la cruzada de Franco*, hizo PRIETO sobre la causa de la enemistad entre los dos purpurados. Ver PRIETO, Inocencio, *Convulsiones en España*, México, 1967, págs. 275-281. Sobre la obra citada de GARRIGA ya hemos dado nuestra opinión en la nota 64 de este capítulo.

de la doctrina católica, principalmente en los tiempos actuales, en los que tan sañudamente son combatidos por los enemigos del reino de Dios". Instrucción que era, precisamente, el objeto de la pastoral, estructurada en cuatro apartados titulados respectivamente: "Derechos divinos de la Iglesia"; "Derechos connaturales de la Iglesia"; "Derechos adquiridos de la Iglesia" y "La defensa de los derechos de la Iglesia".

Apoyándose, según su reiterado estilo, en textos pontificios, hablaba SEGURA en el primer epígrafe de dos clases de derechos divinos, pertenecientes unos a las esferas de la fe y la doctrina y los otros a la organización de la Iglesia y a su régimen y disciplina. Aludiendo a los primeros se refería a la obligación episcopal de mantener incólumes los principios religiosos en un mundo cada vez más lleno de error y paganismo, de lo que eran prueba "los actos bochornosos que hemos presenciado en nuestra Patria", mas frente a lo que la Iglesia permanecería incommovible. Respecto a los segundos reiteraba la también obligación del episcopado de fomentar la unión con la Iglesia -haciendo ver a los fieles las asechanzas de todo orden que les rodeaban en pugna con la fe y las costumbres- así como la obediencia a sus leyes que, dimanantes de su divina constitución, habían de inspirar el debido respeto a los poderes de la tierra "si no quieren más tarde o más temprano, caer aniquilados, cual han venido cayendo uno tras otro los opresores que, prevaleiéndose de la fuerza en las diversas épocas de la historia, han pretendido ;insensatos! sojuzgar a la Iglesia."

Ante esta actitud de los poderes públicos de España que por medio de una frase genérica, SEGURA claramente denunciaba, la Iglesia nunca podría ceder.

Al referirse a los "Derechos connaturales de la Iglesia" derendia el primado su caracter de sociedad perfecta y superior, por razon de su fin, a los Estados; sociedad que, por su origen divino, poseia una serie de derechos especiales irrenunciabiles y que por derecho natural tenia, ademas, todos los inherentes a las demas sociedades para la consecucion de sus fines, tanto los de legislar, juzgar y sancionar, como los de adquirir, poseer, retener y administrar toda clase de bienes temporales; derechos, todos ellos, de los que, al igual que el resto de las sociedades, no podia ser legitimamente despojada ni ningun poder humano podia arrebatareselos.

Al tratar de los "derechos adquiridos de la Iglesia" los distinguira SEGURA, en primer lugar, de los que hasta ahora ha enumerado -que califica de "nativos y sustanciales"- señalando que, junto a ellos, habia ido desarrollando a traves de la historia otro tipo de derechos, tales como los relativos a su organizaci3n y r3gimen que, por medio de nuevas normas, habian ido configurando su C3digo canonico, corolario de los derechos divino-positivos como, en definitiva, lo eran todos los derechos eclesialsticos; los dimanantes de sus pactos con las naciones que si tenian iuerza de ley, como sucedia con el Concordato suscrito con Espa1a, debian ser hasta tal punto respetados que no solo eran nulas todas las disposiciones del poder civil que contra ellos se dictaran, sino que constituian un atentado a la dignidad de las naciones, o, por ultimo, los resultados de las mismas leyes civiles de los Estados o del derecho internacional, los cuales, si debian respetarse siempre, mucho mas habrian de serlo cuando se referian a la Iglesia.

Pasando a ejemplificar estos "derechos adquiridos" SEGURA solo insistira en los dimanantes de las normas estatales para aludir a un tema concreto que, en puridad, no

cabia juzgar de excesiva relevancia, a no ser por la importancia que, al parecer, concedía a la simbología castrense y, así, refiriéndose al hecho consumado de la abolición implícita llevada a cabo por el artículo nº 2 del decreto que establecía la libertad de creencias y cultos, se preguntaba por el juicio que podía merecer "la denegación por un decreto ministerial de privilegios venerandos otorgados en nuestra Patria por la ley y las costumbres muchas veces seculares, a la Iglesia; tales, entre otros, los honores militares debidos al Santísimo Sacramento."

Mas junto a este tipo de privilegios había, además, derechos civiles nacidos "por título de rigurosa justicia conmutativa en virtud de la ley", la violación de tales derechos, como acababa de suceder sin anuencia de la Santa Sede" con relación a la riqueza artística de la Iglesia,⁽²⁴⁰⁾ adolecía de nulidad y vulneraba los cimientos en que descansaban las sociedades humanas.

(240) Por decreto de 22 de mayo se había establecido la prohibición a entidades y personas jurídicas, tanto eclesiásticas como civiles, de enajenar, sin previo conocimiento gubernamental, inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos o históricos de antigüedad superior a cien años. Como complemento de este decreto el de 27 de mayo facultaba a la Dirección general de Bellas Artes para determinar el depósito en museos de aquellas obras de arte que pudieran hallarse en peligro de pérdida o deterioro. (Ver el apéndice num. 27). El cardenal SEGURA se unió a estas palabras a las protestas que había efectuado el cardenal VIDAL a ALCALA ZAMORA el 14 de junio ("Que le diré, para terminar, Sr. Presidente, ... de las disposiciones que dicen relación con la propiedad de la Iglesia, amparada por el Concordato y por las leyes civiles...") y a la realizada sobre este extremo por el nuncio (ver nota 109). Con la salvedad de la de SEGURA no hemos encontrado, sin embargo, otras protestas públicas de la jerarquía contra estas disposiciones, las cuales, no obstante, y dado lo directamente que afectaban a bienes eclesiásticos o custodiados por la Iglesia, fueron publicados en los boletines eclesiásticos para conocimiento de clero y fieles; así lo harían, entre otros, los boletines de Santiago de Compostela (año 70, 31 de julio de 1931, núm. 2657, págs. 356-359 y 30 de septiembre de 1931, núm. 2660, págs. 414-415), Palencia (año 81, 15 de agosto de 1931, núm. 17, págs. 517 a 521), Orihuela (año 50, 1 de octubre de 1931, núm. 17, págs. 319-323) y Segovia (año 77, 15 de marzo de 1932, págs. 134-135).

El corolario de la pastoral tenía por objeto reiterar la defensa que siempre había efectuado la Iglesia de las distintas clases de derechos enumerados, misión que correspondía al papa en primer lugar, después a los obispos y, por último, a los sacerdotes, religiosos y fieles que, unidos al episcopado, habían de formar "el muro y antemuro que [los] proteja y defienda". Para tal defensa no necesitaba la Iglesia de la fuerza, pues bastabanle "sus preceptos, que obligan en conciencia, y sus penas canónicas" entre las que el primado citaba expresamente la excomunión, defendiendo su validez frente a la opinión de los que llamaba "los espíritus fuertes de nuestros días."

Finalizaba SEGURA su escrito haciendo un juicio de valor sobre su actuación personal y sobre las consecuencias que de ella se habían derivado, pues, al congratularse de la pertenencia a la Iglesia, aludía al mayor grado de dicha que sentían los que "por defender sus derechos, que son los de Jesucristo, somos hallados dignos de padecer persecuciones."⁽²⁴¹⁾

Siguió a esta pastoral, en forma casi inmediata, otra en la que, partiendo de la referencia a una "Ofensa inferida a la Santísima Virgen del Sagrario", patrona de Toledo, aunque no especificando en que había podido consistir esta,⁽²⁴²⁾ reiteraba su obligación de cumplir sus deberes

(241) Nuestra Señora de Bel-lac, 20 de julio de 1931, "Instrucción Pastoral de Su Excel. Rvda. sobre los derechos de la Iglesia", BOE de Toledo, año 87, 2 de agosto de 1931, núm. 15, págs. 253-261.

(242) Por las expresiones del primado se trataba probablemente de algún impedimento de las autoridades locales para la celebración de actos de culto en la festividad de la patrona.

pastorales -sin mediar ingerencia por su parte en la cosa publica- en defensa de los principios religiosos:

"Aunque enteramente ajeno, como sabeis, a cuanto signifique intervención, por indirecta que sea, en asuntos locales de orden puramente temporal relacionados con la política de partidos, tenemos por razón de nuestro sagrado ministerio, el derecho y el deber de intervenir con la máxima eficacia posible en cuanto se refiere al culto de Dios, al honor de la Santísima Virgen, a la incolumidad de nuestra santa fe y a la santificación y salvación de las almas."

El deber de tal intervención era tanto más grave cuanto solo del cielo cabía esperar solución "ante el temeroso porvenir que se ofrece a nuestra vista", un porvenir "tan calamitoso y lleno de zozobra" que SEGURA no dudaba en referirse a él con citas de epístolas de San Pablo en que se describe la maldad que rodeará a los hombres como aviso precursor de las postrimerías del mundo. Frente a tanta iniquidad los fieles no debían, sin embargo, temer, pues la divina providencia no dejaría que prevaleciera.

"Empeño de los impíos de todos los tiempos" había sido destruir las sagradas tradiciones de los pueblos, y así, era lógico que ahora estas tradiciones fueran también blanco de los enemigos de la Iglesia, sobre todo aquellas que eran más venerables, entre las que, para el cardenal, ocupaba lugar privilegiado la simbólica ofrenda de España a Santiago, acto de suyo impensable en un Estado cuyo gobierno acababa de decretar la libertad de creencias y cultos y que se abocaba a lograr la plena separación de la Iglesia dotándose de una constitución acorde con los principios políticos de su tiempo. Pero para el cardenal era demasiado importante la simbología de estos actos exteriores a los que llegaba a calificar de "valladar inexpugnable" de la fe:

"¿Cómo no recordar hoy -al celebrar la fiesta del Apóstol Santiago- cómo no recordar con indignación y pena la supresión de la tradicional ofrenda de España a su Santo Patrono, y cómo no protestar de la ofensa que con esta supresión, enteramente injustificada, se ha inferido a los sentimientos católicos de la mayoría de los españoles?" (243)

- (243) La decisión gubernamental de interrumpir esta tradición debió comunicarse en forma privada al arzobispo de Santiago de Compostela, no habiendo hallado noticia de la misma ni en la prensa consultada ni en los boletines eclesiásticos. El de Santiago se limitó a publicar el texto de la invocación pronunciada ese año "por el Sr. Delegado de la Ciudad, D. Ramón Fabeiro, presidente de la Liga de Amigos" y la tradicional contestación del arzobispo, *as sin comentar la falta de representación de las autoridades políticas, ni el acuerdo de no enviar esta representación, el cual tenía su lógica base en el artículo 28 del decreto de 22 de mayo. La invocación pronunciada resaltaría el carácter religioso de "la conciencia nacional", religiosidad que se daba tanto a nivel individual en todos los españoles, como "en todas las instituciones de nuestra Patria", razón por la que esta rendía homenaje a su patrono, no interrumpiendo la cadena de los sentimientos tradicionales, máxime cuando "en momentos tan críticos, tan oscuros" no había de faltarle su amparo. El Dr. Zacarías MARTÍNEZ, destacaría en su contestación que esta ofrenda era quizá la más espontánea que había recibido el apóstol al ser en esta ocasión la del pueblo de Santiago y, seguidamente, haría una admonición sobre los peligros que corrían aquellas comunidades que olvidaban la herencia espiritual del pasado: "¡Ay de los pueblos que se olvidan de los beneficios que recibieron de sus padres, de las glorias y grandezas que les legaron, de los ejemplos santos que les dieron, de la tradición ininterrumpida que los recuerda; porque esos pueblos están muy próximos a la imbecilidad senil y a la ruina total!"; por eso el pueblo de Santiago recordaba esos beneficios y demostraba su fe en unos tiempos en que la impiedad reinante quería arrancarla del corazón de todos los creyentes, debiendo ellos defenderla de ese ataque "con su sangre y con su vida" en todos los lugares. También pedía el arzobispo la ayuda y protección del apóstol "en esta batalla terrible" superior a aquellas en que él intervino y, así como la Iglesia pedía el Viernes Santo "hasta por los judíos pérfidos", pedía él ahora a Dios "que desgarré la venda de los ojos de nuestros enemigos, que envíe un rayo de luz a sus inteligencias extraviadas, para que vean, y una chispa de amor a sus corazones pervertidos, para que amen... y vean al Único Maestro..." (BOE de Santiago, año 70, agosto de 1931, págs. 350-353).*

Frente a tales medidas el pueblo de Toledo, que en el pasado había manifestado, con su Ayuntamiento al frente, el amor a su patrona, no podía menos que aferrarse a sus tradiciones y rendirle el culto debido en su festividad, día en el que, si no se accedía a sus reiteradas instancias obligándole a permanecer contra su voluntad en el destierro, él estaría en espíritu a su lado a fin de pedir por todos aquellos que la habían abandonado y por España.⁽²⁴⁴⁾

La siguiente pastoral de SEGURA, fechada el 15 de agosto de 1931, tenía como destinatarios a los alumnos del seminario de la archidiócesis y sus familias y era el comentario global que el cardenal hacía de las cartas que durante las vacaciones estivales aquellas habían escrito a su rector y que este le había hecho llegar; partiendo de ellas les estimulaba a perseverar en la vocación elegida pese a la situación de persecución religiosa que, decía, se vivía en España.

Expresaba el primado cómo desde la soledad del destierro, "que en días de intranquilidad y de prueba se hace todavía más penosa y triste", eran ellos su principal preocupación, mas también su esperanza y su consuelo por

(244) Nuestra Señora de Bel-lac, 25 de julio de 1931, "Carta pastoral de Su Encia. Rvda. sobre las fiestas de Nuestra Señora del Sagrario", BDE de Toledo citado, págs. 261-264.

Este boletín, además de las dos pastorales del cardenal, incluía una nota en su página 266 que corrobora la incansable actividad de SEGURA desde su exilio:

"DE NUESTRO PRELADO.- A pesar de vivir alejado de la Diócesis, desde el destierro continúa ocupándose normalmente de todos los asuntos de gobierno. No se limita su actividad a la publicación de los documentos que ya conocen nuestros lectores, sino que, en cuanto las circunstancias lo consienten, conoce y resuelve todo lo que pueda interesar a sus diocesanos y particularmente a su Clero.

"En nombre suyo damos las gracias al Clero diocesano por sus continuas pruebas de adhesión, y a la vez suplicamos a todos que continúen orando por su salud y por sus intenciones".

la firme vocación que de sus escritos se desprendía "en medio del ambiente de impiedad que en todas partes se respira"; por ello quería darlos a conocer, por medio de esa pastoral, a toda la archidiócesis "para general edificación y estímulo".

No podía transcribir todas las cartas recibidas pero sí quería entresacar algunos párrafos que reflejaban suficientemente el espíritu de sus seminaristas, párrafos que aludían a la tristeza que los llenaba por el dolor de su prelado y por el dolor de la Iglesia "ante los funestos acontecimientos pasados y los que le esperan" pero que también daban cuenta de que pese a ello, los cultos eran más fervorosos y los templos estaban más concurridos, no habiéndose omitido ningún culto exterior y habiéndose celebrado ese año la procesión del Corpus "como nunca", según describía uno de los seminaristas:

"...las señoras, vestidas de luto, han ido con un recogimiento edificante; pero lo que más emocionaba, era el ver las filas de hombres, que otras veces no han ido y ahora entonaban fervorosos y emocionados el Himno Eucarístico, y que, al entrar en el templo, estallaron en vitores a Cristo Rey; y todos llorando, hombres y mujeres, pedíamos por la salvación de España..."⁽²⁴⁵⁾

(245) A la celebración de las procesiones del Corpus en 1931 ya hemos aludido en la nota 88 de este capítulo, en la que también nos remitimos a los datos del Apéndice núm. 4 de "documentos complementarios". Queremos referirnos ahora, con ocasión del entusiasmo manifestado en la carta de este seminarista ante el comportamiento de los fieles en la procesión de Toledo, y por ello recogida en la pastoral de SEGURA, a un artículo publicado por D. Miguel de UNAMUNO, a finales de mayo en el que, con su tausticidad habitual, enjuiciaba tanto la costumbre de aclamar a Cristo Rey como la de simbolizar la imagen de Jesús -"el Sagrado Corazón"- con un corazón sobrepuesto ("Cristianismo monárquico y monarquismo cristiano", "El Sol", 29 de junio de 1931). Las fuertes críticas dirigidas singularmente a las mujeres católicas por las formas que adoptaba su fe y el deseo implícito de depurar estas prácticas para acercar aquella a su fuente originaria, hacen este artículo de obligada lectura por lo que lo incluimos en el apéndice. Ver el apéndice núm. 28.

Más, a pesar de ese fervor, "los enemigos" eran ahora peores, pues se atrevían a insultarles en su propia cara y trabajaban "con burlas y hasta con amenazas por apartar las almas de la Religión"; esto, sin embargo, no les desalentaba sino que les hacía afianzarse más en su vocación, aunque alguno constatará que en su lugar había pocos niños que les atrajera el seminario, "pues uno o dos que lo intentaban, se han hecho otra cuenta, por miedo".

Reflejadas las frases de sus seminaristas y partiendo de ellas pasaba el primado a hablarles de la vocación que habían asumido y lo hacía con unas palabras que dejaban traslucir su conciencia de la situación singular que en aquellos momentos vivía el clero español. SEGURA quería proclamar especialmente la independencia de los ministros de la Iglesia frente al poder constituido, defendiendo así la autonomía de su propia actuación, pero forzoso le era reconocer que recibían de este una asignación regular de los presupuestos del Estado, asignación cuyo carácter no graciable, por ser resultado de un débito de justicia, recordaba el cardenal para acabar concluyendo que no cabía relacionar la seguridad económica que tal situación reportaba con la realidad del ministerio sacerdotal, ni atribuir por ello al sacerdote la condición de empleado del Estado, pues su función era ajena a aquél y encerraba una dignidad que no tenía parangón con la de ningún cargo público:

"Desgraciadamente en estos tiempos del más brutal y grosero materialismo es frecuentísimo contemplar las cosas más altas y sublimes de la vida a través del prisma del rendimiento económico, norma suprema que regula la actividad de una buena parte del género humano.

«Este criterio naturalista, más o menos disimulado, impera en la formación de nuestras

juventudes y llega a proclamarse públicamente sin el menor recelo ni pudor como finalidad ideal de las aspiraciones de la sociedad.

«No es, pues, extraño que, por ignorancia o por malicia, se haya tratado de aplicar aun al mismo ministerio sacerdotal.

«Recientemente en su Carta Encíclica *Non abbiamo*, de 29 de junio del presente año, condenaba Su Santidad Pío XI con las palabras mas energicas el concepto de "funcionarios del Estado" tan equivocadamente atribuido al Episcopado.

«Ni los Obispos, ni los Sacerdotes somos unos empleados del poder publico, por el mero hecho de que la Iglesia benignamente haya concedido a los supremos gobernantes en virtud de los Concordatos o por privilegios especiales algunas atribuciones respecto a la presentación para la provisión de cargos eclesiásticos;⁽²⁴⁶⁾ ni somos funcionarios del Estado, porque de los presupuestos generales de la nación, por titulo de justicia y en calidad de restitución por los bienes eclesiásticos amortizados, se adjudica una parte al sostenimiento del culto y clero.⁽²⁴⁷⁾

«Aunque nuestro sagrado ministerio redunde en beneficio incalculable de la sociedad civil, no estamos los Obispos y los Sacerdotes *para servir*⁽²⁴⁸⁾ al Estado en sus propias funciones, sino que, *emancipados por nuestra vocación* y nuestro estado de este servicio, somos ministros de Jesucristo y dispensadores de los ministerios de Dios (1 Cor. IV-1 sq.).

- (246)) CUENCA TORIBIO recuerda cómo "el derecho de presentación inherente al poder ejecutivo se mantuvo invariable hasta 1931, para, tras una breve desaparición, volver a manifestarse en el régimen del general Franco", destacando cómo la "curiosa hibernación" sufrida por el Concordato durante la República, permitió a la Santa Sede nombrar libremente a los obispos, coyuntura que sería aprovechada por el nuncio FEDESCHINI para propiciar "la masiva preconización de 1935, la mas nutrida de cuantas se han hecho en la España contemporánea al margen de la potestad civil". CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Sociología del episcopado español e hispanoamericano (1789-1985)*, Madrid, 1986, págs. 310-311; 331-333 y 337.
- (247)) Ver la reiteración de este argumento por la jerarquía española en el apéndice relativo al presupuesto del culto y clero.
- (248)) En bastardilla en el original.

«Por encumbrados, por dignos y nobles que puedan reputarse los más elevados cargos del Estado, supéralos a todos en dignidad y en valor nuestro sagrado ministerio, que tiene por fin no la vida temporal, sino la vida eterna; que procura no los bienes deleznable de este mundo, sino los intereses sobrenaturales de la gracia...»

Por la excelsitud de esta misión eran dignos de alabar los padres que no sólo no ponían obstáculos a la vocación de sus hijos sino que se alegraban por ella, incluso "en estos calamitosos tiempos, en los que se ha declarado la guerra implacable al sacerdocio" pero en los que "la persecución antirreligiosa" venía a dar mayor realce a la misión del sacerdote, evidenciando lo lejos de la verdad que estaban los que le tenían "por un sárdido explotador de las debilidades y miserias humanas", pues "cuando, sobreexcitados los egoísmos por las pasiones desenfrenadas, más resuenan por doquier voces de odios y alaridos de luchas enconadas", más grandes aparecían quienes difundían el mensaje del evangelio y oficiaban el santo sacrificio por los pecados del pueblo, al que, por el contacto inmediato que con él tenían y el conocimiento de sus necesidades y acechanzas, podían llegar a transformar ya que, en palabras de León XIII, "si, llenos del espíritu de Jesucristo y manteniéndose en un orden superior a las pasiones políticas (los sacerdotes) obran en conformidad con las orientaciones de los Obispos, harán con la bendición de Dios verdaderos prodigios. Con su palabra ilustrarán la mente de las muchedumbres, por la suavidad de su trato ganarán sus corazones y acudiendo con caridad a los que padecen, les ayudarán a mejorar poco a poco su triste situación".

Una misión quería destacar SEGURA entre todas las tareas del sacerdocio y que, según contaban sus seminaristas, ellos mismos realizaban: el fomento de las vocaciones sacerdotales, apostolado que era, entre todos, "el más provechoso y necesario en nuestros días", al vivir "en una época de espíritu sectario tan antisacerdotal, que esta es la consigna de los impíos: el anticlericalismo", pues siendo común que aun "los hombres perversos" blasonaran de su religiosidad, esta era de tal índole que rechazaba intermediarios, como si el sacerdote, que cumplía esa función entre Dios y los hombres por designio divino, fuera un obstáculo para su encuentro. Esta era para el cardenal una "astucia verdaderamente diabólica" encaminada a destruir la obra de Dios y que, no pudiendo eliminarlo a él, trataba de aniquilar a sus ministros; sin embargo era en esos instantes, "verdaderamente difíciles, porque en ellos se ha recrudecido la lucha contra la divina Jerarquía de la Iglesia", cuando no tenían por que temer, ya que, pese a "haberse extendido hasta las más pequeñas y apartadas aldeas la persecución religiosa, y haberse llegado a perpetrar atentados criminales contra sacerdotes"¹²⁹ las peticiones de ingreso en el seminario, según le comunicaban -con una información contradictoria con la constatación antes hecha por uno de los seminaristas sobre la escasa atracción que existía por la carrera eclesiástica-, habían aumentado, lo cual era testimonio de la piedad cristiana que seguía existiendo en la mayor parte de los hogares de la archidiócesis, "en los que no ha logrado penetrar el ambiente de indiferentismo y aun de irreligiosidad, que nos envuelve por doquiera", como evidenciaba, y ello era una esperanza para el porvenir, el enviar a sus hijos al seminario, aun "viendo tan cubierto de densas nubes el horizonte de la Iglesia en España".

(129) Ver sobre esta cuestión el epígrafe 10.2, "La jerarquía y el clero".

Signo providencial era para el primado que ese año, "precisamente" -como decía en una indudable referencia a los avatares que venía sufriendo la Iglesia desde el cambio de régimen- hubiera aumentado en la archidiócesis el número de aspirantes al sacerdocio y por ello debían dar gracias y esperar con confianza, sin dejar de seguir colaborando con sus párrocos, mediante la obra y la oración, en el fomento de las vocaciones, labor en la que todos los fieles debían cooperar por ser "hoy más que nunca necesaria".⁽²⁵⁰⁾

Una nueva pastoral escribiría el primado el día 22 de agosto, pastoral en la que, o por considerar que había expuesto suficientemente su pensamiento, o a causa, quizá, de la inmediatez del revuelo producido con la detención del Dr. ECHEGUREN, a la que seguidamente aludiremos, se distanciaba del estilo hasta entonces utilizado: era breve, esencialmente religiosa y sólo en forma tangencial se refería a la situación de España; tenía por objeto recordar con sus fieles la celebración de la octava de la patrona de la ciudad, uniéndose desde el destierro a los actos religiosos celebrados, y confirmando con ellos su perseverancia en la devoción mariana, que le garantizaba que no sería necesario que volvieran "a ser heridos los sentimientos filiales de los corazones de los hijos de Toledo" ni que rugieran "vientos de tempestad" para que "ante el peligro inminente del naufragio" esa devoción se acrecentara.⁽²⁵¹⁾

(250) Nuestra Señora de Bel-lor, 15 de agosto de 1931, "Carta de su Emcia. Rvdom. sobre las vocaciones sacerdotales. El cardenal arzobispo de Toledo a los alumnos del Seminario y a sus familias". BDE de Toledo, año 87, 1 de septiembre de 1931, núm. 17, págs. 288-296.

(251) Nuestra Señora de Bel-lor, 22 de agosto de 1931, "Carta de Su Emcia. Rvdom. La Santísima Virgen del Sagrario es nuestra esperanza". BDE de Toledo, cit. págs. 296-298.

La última pastoral que escribiría el cardenal SEGURA, fechada tres días después de la anterior y publicada en el mismo boletín eclesiástico, iba dirigida al clero de la archidiócesis, siendo la única que contiene, por su fecha de redacción y por su carácter de último escrito del arzobispo como primado, una referencia a las penurias económicas que iba a atravesar por la reciente suspensión de sus temporalidades, hecho quizá desencadenante de que aquí retome su tradicional estilo y que motivó, según se desprende de la pastoral, el ofrecimiento de ayuda por parte del clero.⁽²⁵²⁾ Comenzaba explicando que su propósito cuando sufrió el destierro no había sido otro que el de acercarse a sus sacerdotes, con quienes más debía relacionarse cuando más difíciles eran los momentos que vivía la Iglesia:

"El Señor, en los inescrutables y adorables designios de su Providencia nos ha deparado vivir la historia de la Iglesia en circunstancias delicadísimas y difíciles, en las cuales es más preciso el trato constante del Prelado con sus sacerdotes.

"Este era nuestro vivo deseo, que ya comenzábamos a realizar por el Archiprestazgo de Guadalajara, con intención de recorrer luego todos los demás del Arzobispado, cuando se nos deportó al destierro fuera de la Patria."

Recordaba cómo en esas fechas se reunía con el clero para hacer ejercicios espirituales y era su especial interés agradecerles ahora sus gestos de defensa y solidaridad, tanto "para satisfacción de nuestra conciencia como para ejemplo y edificación del pueblo cristiano", que así conocía la unidad que entre ellos existía, porque "cuando en días de

(252) Como hemos indicado en la nota 213, previamente a la suspensión de las temporalidades, de la que más adelante trataremos en el texto, el cardenal SEGURA había sido dado de baja en el escalafón de maestros nacionales.

triste recordación se desencadenaron contra la Iglesia en España todas las furias del averno, y las olas del cieno de una tempestad de bajas pasiones se precipitaron sobre todo lo más santo", el clero diocesano había formado "un muro infranqueable para proteger Nuestra persona y Nuestro cargo", que no había logrado destruir "ni las acometidas francas ni las amenazas insidiosas", y que cuando había visto a su prelado "despojado de derechos que por tantos títulos le corresponden" lo había "cubierto con el manto de la caridad". No podía, sin embargo, aceptar "ver aliviada Nuestra pobreza con las privaciones heroicas de la vuestra" dadas las estrecheces que el clero sufría y que él había intentado remediar. ⁽²⁵³⁾

Manifestaba seguidamente el cardenal -quizá con el pensamiento puesto en las circulares que había enviado a los metropolitanos- su deseo de poder hablar a los sacerdotes de "otros asuntos, importantísimos para vosotros y para Nos en los actuales difíciles instantes", en particular de su unión con el prelado y la del clero entre sí, tanto del secular como del regular, "para defender con mayor eficacia los intereses de la Iglesia a todos confiados"; las "actuales circunstancias" le impedían, no obstante, hablarles de estos temas. A pesar de ellas y como colofón de la pastoral, SEGURA las instaba a confiar con esperanza y a cumplir "sin reparar en dificultades" con su ministerio. ⁽²⁵⁴⁾

(253) Ver el apéndice sobre el presupuesto del culto y clero.

(254) Nuestra Señora de Bel-lor, 25 de agosto de 1931, "Carta de su Ecclia. Rvda.", BOE de Toledo, cit., págs. 285-286.

9.5. El documento colectivo de 25 de julio de 1931.

9.5.1. Los proyectos de la jerarquía y las directrices de la Santa Sede.

La presentación al ministro de Justicia el día 6 de julio del "Anteproyecto de Constitución de la República Española que eleva al Gobierno la Comisión jurídica asesora" y su inmediata publicación en la prensa había alertado inmediatamente a toda la jerarquía que, dados los términos de aquel, veía la necesidad de intervenir en defensa de los intereses de la Iglesia.

Así, desconociendo aun las preguntas planteadas por el primado con relación a la labor de las Cortes constituyentes y la conveniencia de elaborar los documentos colectivos de que trataba en su circular número VI de 20 de julio, varios prelados, ante la ausencia de aquél, comenzaron a dirigirse al cardenal VIDAL comunicándole sus proyectos y en demanda de orientación.⁽²⁵⁵⁾

(255) Antes de estas comunicaciones tanto el nuncio como los arzobispos de Valencia y Burgos habían recomendado y pedido al de Tarragona que asumiera, por medio de las oportunas iniciativas, la dirección de todo el episcopado, a fin de lograr la necesaria uniformidad de criterio. Así se había expresado TEDESCHINI en la carta a VIDAL de 10 de julio y también lo harían MELÓ y BANDASESUI en cartas de 11 y 15 del mismo mes. *Església i Estat durant la segona*... I, págs. 115-121; 123 y 149. Esta propuesta sería rechazada por VIDAL según su reiterada idea, ya expuesta tanto al nuncio como en Roma, y que repetiría al arzobispo de Burgos en carta de 16 de agosto, de que, en lugar de direcciones unipersonales las deliberaciones se efectuaran: "a) Sufragáneos con Metropolitanos; b) éstos entre sí; c) para asuntos urgentes o que no fuese prudente la reunión, tres grupos de Metropolitanos; Toledo, Sevilla, Granada-Burgos, Santiago, Valladolid-Valencia, Zaragoza, Tarragona, presidido cada uno por el más antiguo o digno. Así bastaba la reunión en Madrid de tres personas, que pasan desapercibidas fácilmente, cambian impresiones con el Sr. Nuncio para no estorbar sus gestiones, y dan las oportunas normas a todos los

El primero en hacerlo fue el Dr. GOMÁ que, tras quejarse de "la actual pasividad de todos ante la gravísima situación que se nos ha creado" y partiendo de la hipótesis de que VIDAL, en lugar de efectuar el viaje por propia iniciativa, había sido llamado a Roma "para empalmar con lo interrumpido", se ponía a sus órdenes. Juzgando la situación creada a la Iglesia española por la República añadía el obispo de Tarazona "Creo hemos perdido ya una serie de episodios de la batalla furiosa que se nos da", ante lo que expresaba su esperanza de estar aún a tiempo "para prevenir cosas mayores y salvar de lo hecho lo que podamos". Como actuación propia comunicaba a VIDAL que pensaba elevar una protesta a las Cortes en cuanto estuvieran constituidas, si bien añadía: "lo dejaré si no me dice lo contrario".⁽²⁵⁶⁾

A pesar de que Batllori y Arbeloa indiquen que esta última frase de GOMÁ es de sentido "ambiguo e incierto",⁽²⁵⁷⁾

hermanos en la forma indicada". (Op. cit., I, págs. 147-148 y 217. Ver también las notas 107 y 229 de este capítulo). Según indican los editores del archivo del cardenal VIDAL parece que esta idea le fue inspirada por el capuchino Rupert M. de Manresa, según un escrito probablemente fechado el 9 de julio y en el que, tras criticar duramente el anteproyecto de la constitución, señalaba que su contenido obligaba a pensar seriamente en robustecer la organización interna de la Iglesia y a un frecuente contacto de los prelados entre sí. (Op. cit., pág. 148, nota 7).

(256) Op. cit. I, págs. 162-163. Al quejarse de la pasividad del episcopado, indicaba GOMÁ que él había hecho "cuanto debía, hasta tal vez llegar a la impertinencia, para llegar a una solidaridad que juzgo absolutamente necesaria", si bien pensaba que nada había logrado. Sobre ello BATLLORI y ARBELOA señalan que debe referirse a las circulares y pastorales hasta entonces publicadas en el boletín de su diócesis, añadiendo que desconocen otras actuaciones del obispo cerca de la nunciatura, la Santa Sede, los otros prelados o el Gobierno, *Ibid.*, nota 2.

(257) *Ibid.*, nota 5.

cabe interpretarla, y así lo hizo el cardenal VIDAL, en el sentido de que no actuaría a no ser que el mismo le indicara hacerlo; por ello, tras rechazar cualquier clase de dirección unipersonal del episcopado, por estar expuesta a "lamentables errores", e insistir en su idea de comunicación de los obispos con los metropolitanos y de estos entre sí, el cardenal le indicaba que hacía bien en suspender el documento, en todo caso, si mas adelante se estimaba prudente, sería preferible que toda la provincia eclesiástica lo hiciese suyo.***

La prolífica pluma de GOMA no le permitiría, sin embargo, y pese al consejo del arzobispo de Tarragona o a los proyectos del cardenal SEGURA, dejar de aparecer en solitario en un documento personal comentando el proyecto definitivo de la constitución, si bien, siguiendo las directrices de VIDAL, tal documento no sería elevado a las Cortes sino dirigido a los fieles en el mes de agosto como "Exhortación pastoral ante un proyecto de Constitución".***

Al día siguiente de que lo hiciera el Dr. GOMA se dirigiría al cardenal VIDAL el obispo de Avila, Dr. Enrique PLA y DENIEL, comunicándole, en atención a que era el cardenal mas antiguo de España, su propósito de publicar un "Alegato contra la proyectada apostasia del Estado español", al determinarse en el anteproyecto de la Constitución que no existía religion de Estado y a no ser que se pensara publicar un documento colectivo en tal sentido; por lo que le rogaba que le comunicara si había de abstenerse de llevar a cabo su proyecto.*** Así lo haría VIDAL por carta de 28

(258) Contestación del cardenal VIDAL de 31 de julio. Op. cit., I, págs. 170-171.

(259) Ver el capítulo sobre la Constitución.

(260) Op. cit., I, págs. 163-164.

de julio indicándole que al estarse practicando gestiones reservadas de orden colectivo era preferible que no realizara ninguna actuación,⁽²⁶¹⁾ limitándose el obispo de Ávila a publicar el 25 de agosto una "Circular ordenando rogativas para que se dé a España una Constitución favorable al bien de la religión y de la patria".⁽²⁶²⁾

También el arzobispo de Burgos, Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, escribiría a Vidal el 2 de agosto indicándole que varios de sus sufragáneos le preguntaban si no sería conveniente elevar una exposición unánime a las Cortes.⁽²⁶³⁾ La respuesta de VIDAL no figura en su archivo, pero, como indican sus recopiladores, debía estar basada en una nota autógrafa del cardenal que figura en esta misma carta y por la que se desprende que a la provincia eclesiástica de Burgos ya se había vuelto a dirigir el primado instando a la firma de un documento colectivo, como más adelante se dirigiría al propio VIDAL; sobre ello anotaba el cardenal su ya expuesta preferencia de que se actuara por provincias eclesiásticas y añadía refiriéndose a SEGURA: "Temo que si las Cortes o el Gobierno se enteran de quien maneja la cosa, o si por la forma o estilo se traduce, empeoremos la situación de la Iglesia; las personas deben hacerse cargo de las circunstancias, y a veces por una temporadita saber eliminarse y callar".⁽²⁶⁴⁾ La carta de VIDAL no llegó empero a tiempo de evitar la contestación del de Burgos a SEGURA ya que, como le manifestaría el día 14, había contestado al primado indicándole que podía disponer de su firma, para

(261) Op. cit., I, pág. 169.

(262) Ver el capítulo siguiente.

(263) Op. cit., I, pág. 178.

(264) Op. cit., I, pág. 178, nota 3.

evitar lo que le ocurrió con el primer documento colectivo del episcopado, fruto de la conferencia de metropolitanos de 9 de mayo, en el que se había omitido "insidiosamente" su nombre.⁽²⁶⁵⁾ No obstante, y dado que estaba de acuerdo con la idea de VIDAL, pensaba redactar el comunicado de su provincia eclesiástica, una vez se conociera el informe de la Comisión.⁽²⁶⁶⁾ Aparte de dar al cardenal estas noticias, el arzobispo de Burgos no se privaría de hacer en su carta un duro comentario sobre el primado, indicando que el de Tarragona debería haber expuesto ante la Santa Sede los peligros que podían derivarse de su actuación, en la línea de lo que había sido, según la nota que hemos reseñado, la contestación que le había enviado:

"¿Por qué no expuso en Roma esta situación ante el prurito de ese Señor de ser el Papa en España? Va a ser preciso hablar claro, si no queremos que se nos envuelva. Yo le escribí que estimaba que no debían figurar en la exposición las firmas de él ni del de Vitoria, a fin de que, con libertad, se pudiera tratar de su ausencia y pedir su vuelta; pero no sé lo que hará. De todos modos esperaré a ver lo que se manda, y haré lo mío."⁽²⁶⁷⁾

En tales tesituras estaban los miembros del episcopado cuando el día 10 de agosto el nuncio TEDESCHINI les trasladaría las directrices recibidas de la Santa Sede encaminadas a lograr la modificación de los artículos del

(265) El subrayado es de CASTRO ALONSO. Ver sobre esta cuestión lo dicho en la nota 98 de este capítulo.

(266) BATLLORI y ARBELLOA indican que tal comunicado no figura en el Archivo de las Cortes Españolas. *Op. cit.*, I, pág. 216, nota 3.

(267) *Op. cit.*, I, págs. 216-217.

anteproyecto de Constitución contrarios a la Iglesia. Ya que en el Parlamento no se contaba con el suficiente apoyo, se dejaba a la libre iniciativa de los metropolitanos con sus sufraganeos el hacer cuanto estimaran procedente para mover el problema religioso entre los fieles, a fin de "poner de manifiesto, fuera de las Cortes, la vitalidad, la pujanza, la insuprimibilidad de un problema tan esencial a España como el problema de la vida católica". Las actuaciones a realizar debían hacerse, no obstante

"...excluyendo desde luego cualquier cosa que pueda o herir al Gobierno, o parecer contraria al Régimen constituido, o provocar a las turbas y a los partidos, o simplemente tener apariencia de manifestaciones irrespetuosas o callejeras; y limitándose al solo y puro aspecto religioso y a los medios legítimos que puedan públicamente poner de relieve la importancia suma de los sagrados intereses de la Iglesia, y ampararlos contra los gravísimos peligros empuentes."***

Estas instrucciones de PEDESCHINI habían recibido a VIDAL una última carta en demanda de orientación; tal fue la cursada por el arzobispo de Zaragoza, Dr. Rigoberto DOMENECH VALLS, preguntándole qué pensaba hacer él en su archidiócesis al recomendar el nuncio que el momento del problema religioso entre los fieles se hiciera, al tiempo, con suma prudencia y discreción.***

(268) Op. cit., I, pag. 198. Ver en el capítulo "La Constitución de 1931", epígrafe 2, "La actuación a seguir ante el anteproyecto de Constitución", los antecedentes de estas instrucciones en la carta del nuncio al cardenal VIDAL de 27 de julio y en la contestación de este de 1 de agosto.

(269) Op. cit., I, págs. 219-220. Según indica BATLLORI y ARBELLOA no se conserva la contestación dada por VIDAL a esta carta.

9.5.2. Las iniciativas del primado.

Mientras así se manifestaban algunos prelados y la Santa Sede indicaba la estrategia a seguir, el cardenal SEGURA perfilaba sus ideas respecto a la oportunidad de publicar un documento colectivo dirigido a los fieles según había expresado en la circular de 20 de julio, ya que, al parecer, y de acuerdo con las contestaciones que le llegaban de algunos obispos a las preguntas que en ella hacía sobre esta cuestión, este proyecto era compartido por otros miembros de la jerarquía, a diferencia de la opinión que mantenía VIDAL.

De esta forma, con fecha 7 de agosto, se dirigiría a los metropolitanos por medio de otra circular (numero VII), en la que, apoyándose en la forma en que le urgían varios prelados, insistía en la necesidad de publicar un documento colectivo antes de que comenzara a discutirse en el Parlamento la Constitución, e incluso contra la opinión expresada por el arzobispo de Burgos, antes de que la Comisión parlamentaria emitiera su dictamen, para evitar el peligro de que la mayoría votara este. SEGURA descartaba expresamente la idea de VIDAL: "Creo que sería de mucho más efecto, en estas circunstancias, una Pastoral Colectiva de todo el Episcopado, que no documentos pastorales individuales, o de Provincias Eclesiásticas" y, lo que era más relevante, dada la premura que exponía, excluía la posibilidad de enviar el texto del documento para la previa aprobación de los obispos, por lo que le pedía -como había anunciado a VIDAL el arzobispo de Burgos, que, al parecer recibió otra carta de SEGURA en fecha anterior- el voto de confianza autorizando la inclusión de su firma. Sobre esta cuestión y sobre el contenido a dar a la pastoral, el

primado haría las siguientes puntualizaciones:

"Tengo ya cartas de bastantes Prelados con autorización expresa. Si V.E. y los demás Rvdmos. Metropolitanos estiman conveniente la Carta, pudiera hacerse pública en el plazo de breves días, recibiendo un ejemplar impreso cada Hermano para que pudieran publicarle en sus respectivos Boletines Oficiales.

«Como los Hermanos de mi Provincia Eclesiástica están todos conformes en el caso de que a la mayor parte de los Rvdmos. Metropolitanos no pareciese conveniente el carácter colectivo de la Pastoral sin previo conocimiento de su texto, habría de publicarse tan sólo como Carta Pastoral de mi Provincia Eclesiástica.

«No tengo que decirle cuánto agradeceré obre con la más absoluta libertad.

«Para poder proceder yo en consecuencia de las respuestas recibidas, estimaría en mucho tuviese la bondad de contestarme telegráficamente al Episcopado de Bayona, conviniendo en que, si está conforme con la publicación del documento y autoriza su firma, me ponga estas solas palabras: "estoy conforme"; y en caso contrario, diga: "necesito pensarlo", firmando en ambos casos con su nombre, no con el cargo.

«La Carta pastoral habrá de ceñirse exclusivamente a recordar la doctrina de la iglesia sobre los puntos del proyecto de Constitución, relacionados con sus derechos, utilizándose para ello, y para evitar toda clase de interpretaciones y compromisos, los mismos textos pontificios con sus mismas palabras.

«El otro punto referente a la exposición dirigida a las Cortes Constituyentes da algo más de tiempo, y permite esperar la contestación por cartas, y hasta someter, en el caso de que se reputase conveniente, el texto a previa aprobación." (170)

Aun volveria SEGURA a insistir inmediatamente en su idea pasando a constreñir en cierta forma la actuacion de los preladados, toda vez que por una nueva circular, la numero VIII, del 9 de agosto, dirigida a todo el episcopado, les reiteraba lo expuesto en la anterior a los arzobispos pidiendoles "por si coincidieran los pareceres de los Rvdmos. Metropolitanos", la autorizacion de su firma y añadiendo que si no contestaban telegraficamente expresando su desacuerdo, entenderia el silencio como aquiescencia, todo ello en razon de la urgencia que determinaba el que parecia que se precipitaba la votacion de la constitucion."

Ante esta circular la reaccion de VIDAL fue inmediata, dirigiéndose al nuncio en unos terminos muy similares a los que ya hemos visto expuestos cerca del arzobispo de Burgos:

"Se enteraran de quien dirige: el estilo o forma, o el correo, o la falta de reserva, lo delataran y empeoraremos la situacion, y tal vez se crean que desde Roma manejan las cosas, a lo que dañan pabulo las cartas que V.E. ya conoce.

«Yo creo mucho mejor hacerlo por Provincias. Y dirigirlo a las Cortes, que hoy es el poder soberano, y al mismo tiempo publicarlo, para orientacion de los fieles. No conocemos, por otra parte, el dictamen de la Comision parlamentaria y nos exponemos a *aerem verberare*, y a que se tome

(271) Op. cit., I, pag. 197. Indican BATLLORI y ARBELDA que en cuanto a los obispos de Cataluña, según se desprende de las cartas enviadas por estos a VIDAL (no publicadas en el ARXIU) su parecer era el siguiente: el Dr. Juan PERELLÓ, obispo de Vich, no quiso contestar sin conocer la opinión de su arzobispo (carta de 11 de agosto); el Dr. Félix BILBAO, obispo de Tortosa, contestó a SEGURA señalándole que como la provincia tarraconense preparaba un mensaje a las Cortes, se atenia a lo que determinase el de Tarragona (carta a VIDAL de 14 de agosto); el Dr. VILA MARTÍNEZ, obispo de Gerona, adoptó el silencio aprobatorio (19 de agosto); parece, por último que el Dr. JURITA, obispo de Barcelona, se adhirió a la propuesta de SEGURA. Ibid, nota 4.

como un ataque importuno al Gobierno o a las Cortes. Por eso encuentro mas ventajosa aquella solución.

«Hay personas que no conocen la realidad; yo veo que los grandes políticos saben caillarse, y eliminarse por una temporadita. De palabra podria ser mas explicito.»¹²⁷²

A los dos dias de enviar esta carta el cardenal recibiria un telegrama de SEGURA indicandole que habia interpretado su silencio como conformidad y que habia dado la orden de publicar el documento,¹²⁷³ a lo que VIDAL contesto tambien telegraficamente pidiéndole que suspendiera la publicacion y pasando inmediatamente a escribir una razonada respuesta al primado explicandole lo inoportuno de su proposito con el deseo de hacerle desistir del mismo. Ponia asi de relieve el arzobispo de Tarragona que el documento podia ser considerado como un ataque al Gobierno, maxime cuando se hablaba de agitaciones en el norte, por lo que podia decirse que se intentaba mover la opinion publica para favorecer la restauración monarquica;¹²⁷⁴ por otra

(272) Carta de 10 de julio de 1931. Op. cit. I, pag. 199.

(273) Op. cit. I, pag. 200, nota 2. Sobre la forma en que el cardenal VIDAL recibiria la circular numero VIII de SEGURA y este telegrama. Ver ibidem y pag. 199, nota 1.

(274) Ya en la citada carta del cardenal VIDAL al Secretario de Estado vaticano de 27 de junio le habia dado noticia de los rumores de alzamiento en el norte "(Navarra y Provincias Vascongadas), donde la gente conserva la fe y es muy amante de sus tradiciones" manifestándole su opinión sobre lo que, si bien "podria ser una esperanza para el dia de mañana", consideraba entonces un grave riesgo por las razones que apuntaba, entre la que no dejaria de resaltar que podia ser atribuida a manejos del clero y de los religiosos, añadiendo (y aqui hay una clara expresion de la actitud politica del cardenal) que lo que convenia era que la nueva situación -es decir, el nuevo regimen-cayera por sus desaciertos "y no por las dificultades, aun muy legitimas, que le pongan los elementos eclesíasticos", a quienes ni aparentemente debia "poder acusarse de procurar o favorecer la revolución contra el poder constituido"; era necesario para VIDAL esperar el desarrollo de los acontecimientos -que, a su juicio, no se harian esperar- fuese a base de una restauración monarquica,

parte la policia se habia apercibido de sus frecuentes comunicaciones con el episcopado,⁽²⁷⁵⁾ por lo que existia la posibilidad de que se pensara que para el documento habian llegado instrucciones de la Santa Sede por su conducto, lo que era necesario evitar y era conveniente, además, el examen y deliberacion del texto por los preiados al no ser el asunto tan urgente ya que la Comision parlamentaria aun tardaria en dar su dictamen. Insistia tambien el cardenal que el documento deberia ir dirigido a las Cortes, como poder soberano, y realizarse por provincias eclesiasticas, *amen* de resaltar la necesidad de *mantener* en todas las cuestiones una relacion constante con la nunciatura.⁽²⁷⁶⁾

que no fuera en ALFONSO XIII, o por una dictadura republicana (Op. cit., I, págs. 91-92). Nuevamente en la carta tambien dirigida a PACELLI el 12 de agosto (es decir en la misma fecha en que hacia su advertencia a SEGURAI), incluia el arzobispo de Tarragona una referencia a un posible alzamiento monarquico -en forma de postdata y sin alusion geografica expresa, aunque indudablemente centrada en las mismas provincias antes mencionadas- en la que ya daba cuenta de la simpatia y apoyo en que este era visto por "algun elemento del clero secular y regular", lo que veia contrario a los mandatos y al espiritu de la Iglesia. (Op. cit., I, págs. 208-209). Por ultimo, y comentando las manifestaciones hechas por ALCALA ZANORA al Dr. CARRERAS en la entrevista de que despues trataremos, asi como las contenidas en las cartas recibidas de aquel sobre el tema del posible levantamiento en el Pais Vasco y Navarra, indicaba VIDAL al nuncio el 29 de agosto su opinion sobre tal plan al que consideraba "descabellado, inoportuno, temerario, opuesto al espiritu y practica de la Iglesia, de repercusiones y consecuencias fatales para los intereses de los catolicos, que sufririan una larga persecucion", toda vez que la violencia por parte de estos hacia mas compacta la union de los elementos heterogeneos que existian, siendo lo conveniente, a su juicio, "que los de buena fe y de buenas ideas se vayan separando de los sectarios..." (Op. cit., I, pág. 268).

(275) Mas adelante trataremos del grave incidente que supuso, por la razon que apuntaba VIDAL, la detencion del Vicario general de Vitoria, Dr. Justo ECHEGUREN.

(276) Op. cit., I, págs. 200-202.

Estas mismas ideas serian expuestas por el cardenal VIDAL al Secretario de Estado Vaticano en carta del 12 de agosto en la que, tras aludir a la situación politica del momento y las actuaciones seguidas por el en union de sus sufraganeos⁽²⁷⁷⁾ le daba cuenta de la actuacion del primado, lamentandose de que este y el nuncio no se entendieran bien cuando era mas conveniente que todos aparecieran unidos, por lo que, para solucionar estas dificultades, insistia en su idea de formar tres grupos de metropolitanos⁽²⁷⁸⁾ o al menos una Comisión, presidida por el de Toledo, que obraria de acuerdo con el nuncio ya que, segun expresaba al finalizar su carta:

"Es hora la actual de hacer trabajos de zapa y gestiones ocultas y diplomaticas cerca del Gobierno y de los diputados de la Comisión para conseguir mejorar el proyecto de Constitución. Atendida la composicion de la Cámara, cualquier otro procedimiento lo considero peligroso y contraproducente; por eso el documento colectivo no es hoy el momento de publicarlo en la forma que se intenta, pues producira en los diputados el efecto de un revulsivo y acentuaran la nota antirreligiosa; ya vendra la hora de realizarlo."⁽²⁷⁹⁾

El cardenal VIDAL escribiría, por ultimo, al nuncio contandole los datos de la recepcion del telegrama del primado así como sus contestaciones, telegrafica y por escrito, y expresandole su temor de que su respuesta llegara tarde en un momento en que, a su juicio, habia que apurar "todos los medios pacíficos y suaves que la prudencia y man-

(277) Ver el capítulo siguiente.

(278) Ver la nota 266.

(279) Op. cit., I, págs. 207-208.

sedumbre cristiana aconsejan", pues no era hora "de los documentos enérgicos y de las vivas y sentidas protestas".⁽²⁸⁰⁾ Su temor era fundado, como se desprende de la laconica y escueta nota que le envió SEGURA:

"Según le indicaba yo en el mío, después de pasados tantos días, interpreté su silencio como aquiescencia. Daba motivo a esta interpretación su carta del 20 de julio, fechada en Roma, en la que me decía 'supongo se habrá enterado del proyecto de Constitución; creo se habrá de hacer algo en defensa de los derechos de Dios y de su Iglesia, que se lesionan en aquél.'"

«Mucho deseo le sirva de descanso su estancia cerca del Pirineo, y logre la restauración total de su salud con los aires puros, que en ésa se respiran.»⁽²⁸¹⁾

Una vez publicado el documento colectivo en la forma en que inmediatamente describiremos, SEGURA ampliaría esta nota como una extensa carta explicándole las razones de la publicación, basadas, fundamentalmente, en el disgusto de los católicos por el silencio del episcopado, en la urgencia de que el documento apareciese antes de que la Comisión parlamentaria emitiese dictámenes y en que todos los obispos que habían escrito habían autorizado su firma, consignando "a excepción de V.E. (...) la necesidad imprescindible en

(280) Carta de 13 de agosto de 1931, Op. cit., I, págs. 209-210.

(281) Op. cit., I, pág. 220.

en estos momentos de demostrar la unión de todo el Episcopado."²⁸²

9.5.3. La publicación del documento.

Tanto BAILLORI y ARBELLOA, como MUNTANYOLA, como IRIBARREN, dan cuenta de la anomalía que supuso el hecho de que, por alguna filtración, el primero en publicar el documento colectivo, antes de que lo hiciera ningún boletín eclesiástico, fue el diario integrista de Madrid "El Siglo Futuro" del día 15 de agosto; en esta versión, que sería reproducida al día siguiente por varios periódicos católicos, el documento aparecía fechado el 25 de julio, festividad de Santiago. A la gravedad de este hecho se añadiría otra más singular y es que "La Gaceta del Norte", de Bilbao, publicaría el día 16 de agosto un texto notablemente distinto de aquél y fechado el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, texto que, a diferencia del incluido en los demás periódicos y boletines eclesiásticos -que dieron la versión que sería publicada en el boletín eclesiástico de Toledo que aparecería con fecha 14 de agosto-

(282) Op. cit., I, págs. 221-222. VIDAL se quejaría al nuncio de la forma en que se había publicado el documento y, al mandarle el 29 de agosto copia de las cartas recibidas de SEGURA, le expone su temor de que aquel le hiciera aparecer como nota discordante, a lo que el nuncio le daría la razón añadiendo que a él le constaba que también estaban distorsionados con la publicación los arzobispos de Valladolid y de Burgos (que ya hemos visto que razones dio para autorizar su firma) y el obispo administrador de Solsona. Op. cit., I, págs. 266-269 y 273-275. De las anomalías de la publicación VIDAL daría cuenta también al Secretario de Estado vaticano ya el 9 de septiembre de 1931. Op. cit., I, págs. 295-299.

sería, para mayor confusión, el que publicaría el boletín eclesiástico de Tarragona.

La razón de esta distinta publicación quizá radique en el interés del cardenal VIDAL en no aparecer como "nota discordante" o dar una impresión de desunión de la jerarquía, según los temores que le había expresado al nuncio de que a ello pudiera conducir la actuación del primado respecto a él, por lo que lo más probable es que ordenaría la inserción del documento en el boletín de su diócesis en cuanto tuvo conocimiento de su existencia a través del ejemplar de "La Gaceta del Norte" que, al parecer, le entregó el obispo de Solsona (a quien ignoramos quien lo remitió) mientras se hallaba veraneando en esta localidad, sin sospechar la existencia de otro texto y sin hacer las oportunas averiguaciones, aunque no dejando de manifestar al nuncio su perplejidad por la forma en que el documento había sido publicado, a través de la prensa, en la carta que le envió el 18 de agosto remitiéndoselo. La pastoral publicada por el boletín de Tarragona era considerablemente más extensa que la de Toledo que, al parecer, basada en aquella, sufrió una remodelación posterior para hacerla más breve, lo que hizo que, aunque el contenido del mensaje de ambas fuera, desde luego, idéntico, se tratara, en definitiva, de dos textos distintos "hasta el punto - destaca Iribarren- de que el Archivo-Vidal publica los de Tarragona y Toledo a dos columnas". (283)

(283) Ver nota anterior y Op. cit., págs. 141 y 121, IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del Episcopado español 1870-1974*, Madrid, 1974, pág. 37 y MONTANYOLA, Ramón, *Vidal y Barraquer, El cardenal de la paz*, Barcelona, 1971, pág. 207. La precipitación con que el texto de la pastoral colectiva fue incluido en el boletín eclesiástico de Tarragona se deduce de la nota a pie de página a que remite su título: "En prensa el presente número, leemos en "La Gaceta del Norte" esta Carta Pastoral que por su gran importancia en los actuales momentos publicamos en esta edición, dejando para el número siguiente la conclusión de la Encíclica de S. Santidad sobre la restauración del orden social N. de la R.", BOE de Tarragona, año 67, 17 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 326-344. Esta precipitación dio lugar, como hemos indicado, a evidenciar

El documento, que el nuncio calificaria de "equivocado" y productor de un "deplorable efecto de desprestigio" para la Iglesia, siendo, ademas, "llamado por verdadera ironia, colectivo, mientras todo el mundo sabe que fue obra de uno solo" y que para VIDAL adolecia de la falta del "balsamo de suavidad y mansedumbre", fue tan mal recibido por el gobierno que provoco la inmediata reiteracion de la peticion de remocion de SEGURA de la silla primada.

9.6. La detención del Dr. Justo Echeguren y la agravación de la situación de Segura.

Un hecho de mayor gravedad, al que ahora se añadia la publicacion de la pastoral colectiva, acababa de empeorar, por lo demás, la situación del primado.

la falta de conexión entre la jerarquía del único otro boletín que efectuaría igual publicación sería, como indicamos en el capítulo sobre la Constitución, el de Urgel). Incorporamos el publicado por el boletín de Tarragona como apéndice 29. Para el publicado con carácter general nos remitimos al capítulo "La Constitución de 1931".

(284) Op. cit. I, págs. 273-276.

(285) Op. cit. I, pag. 221, nota 3.

Ya hemos tenido ocasion de exponer como el mismo dia en que el Dr. MUGICA era desterrado de España, el cardenal VIDAL, en la carta que dirigiera a ALCALA ZAMORA protestando principalmente por la quema de iglesias y conventos pero tambien por determinadas actuaciones del gobierno y de las autoridades locales, no dejaba de referirse a la expulsion del obispo de Vitoria, indicandole que con caracter previo a tal decision deberia haberse puesto el caso en manos del nuncio en lugar de interir tal ofensa a la Iglesia.'''

Tambien nos hemos referido a las quejas elevadas por distintos prelados por el destierro del primado, quejas que, en la mayoria de los casos, enlazaron con la relativa a la expulsion del Dr. MUGICA.''' Junto a ellas, y segun se desprende de la correspondencia mantenida con el cardenal Vidal, hay que aludir a las protestas y gestiones personales realizadas por el mismo nuncio cerca del gobierno.

Tales intervenciones estaban a punto de dar el fruto deseado y, en consecuencia y segun VIDAL comentara al cardenal FACELLI en carta de 9 de septiembre,''' estaba ya convenido el regreso a España tanto de SEGURA como de MUGICA cuando tal acuerdo quedo sin efecto''' a consecuencia de

(286) Ver la nota 137.

(287) Tal harian, como hemos apuntado, el obispo de León, Dr. ALVAREZ MIRANDA; (nota 124) y el Dr. CASTRO ALONSO, arzobispo de Burgos, (nota 125), provincia de la que era diócesis sufragánea Vitoria, así como el obispo de Orense, Dr. CERVIAO GONZALEZ (nota 129) y el administrador apostólico de Ibiza, Dr. HUIX y MIRALPEIX (nota 130).

(288) Op. cit., I, págs. 295-299.

(289) Señalan BATLLORI y ARBELLOA que no conocen la fuente de esta noticia. Ibidem, nota 21.

la detención, el día 14 de agosto, del Dr. Justo ECHEGUREN, vicario general de Vitoria, motivada porque al efectuarse en la frontera el registro de los documentos que portaba, había sido descubierta la circular número VI, de 20 de julio, del cardenal SEGURA enviada por el primado a Vitoria, y todos los anexos que la acompañaban, entre ellos, el dictamen del asesor MARÍN LAZARO, que el vicario trasladaba a Anglet, residencia entonces habitual del Dr. MUGICA. Detenido en Irua por el comisario de vigilancia fue llevado a San Sebastián, donde el gobernador civil le interrogó y si bien fue liberado el día 16, por apreciarse su buena fe en la ignorancia de lo que trasladaba, este hecho dio lugar a que toda la documentación fuera enviada al gobierno que, así, pudo conocer las directrices que, desde el exilio, seguía impartiendo el primado al episcopado español, hecho que se vio agravado por la publicidad que se daría a la detención del vicario y que provocó la inmediata respuesta del gobierno el cual procedió, por una parte, a suspender el 18 de agosto las temporalidades tanto del primado como del Dr. MUGICA y, por otra, a publicar un decreto, fechado el 20 de agosto, que, para evitar las actuaciones a que podían dar lugar los documentos aprehendidos, prohibía la venta de cualquier tipo de bienes eclesiásticos llevando así hasta el máximo rigor respecto a la Iglesia -la interdicción absoluta- las disposiciones contenidas en los decre-

(290) La liberación del Dr. ECHEGUREN le autorizaba a trasladarse a Anglet para visitar a su obispo, pero con la condición de regresar de inmediato a San Sebastián y de dar cuenta en todo momento de su residencia por si fuera preciso citarle a declarar nuevamente. ("El Sol", 18 de agosto de 1931).

(291) A pesar de que el gobierno quiso evitar que el contenido de los documentos fuera conocido por la opinión pública estos también fueron finalmente dados a la luz, a primeros de septiembre, por "El Siglo Futuro", como más adelante expondremos con mayor detalle. (ver la nota 311).

tos de 22 y 27 de mayo y que ya habían provocado, por su contenido general, la protesta de la jerarquía.⁽²⁹²⁾

- (292) Ver la nota 240. Como continuación de aquellos decretos con fecha 3 y 7 de julio habían sido aprobados otros dos, complementarios, por los que venía a prohibirse temporalmente la exportación de objetos artísticos, arqueológicos o históricos anteriores a 1830 y se establecía que sólo cuando su valor fuera superior a 50.000 pts. debería darse cuenta de su enajenación al gobernador civil ("Gaceta de Madrid" de los días 4 y 8 de julio).

El decreto de 20 de agosto de 1931, publicado en diversos boletines eclesiásticos (BOE de Valencia, 1 de septiembre 1931, núm. 2130, pág. 299; BOE de Málaga, 15 de octubre de 1931, núm. 11, pág. 404; BOE de Urgel, 10 de noviembre de 1931, núm. 22, págs. 358-359...) era del tenor literal siguiente:

"Artículo 19. Desde la fecha de publicación de este Decreto queda suspendida la facultad de venta, enajenación y gravamen de los bienes muebles, inmuebles y derechos reales de la Iglesia, Ordenes, Institutos y Casas religiosas y, en general, de aquellos bienes que de algún modo estén adscritos al cumplimiento de fines religiosos.

"Artículo 20. Los Notarios no autorizarán ningún instrumento público sobre los bienes antedichos, y los Registradores de la Propiedad denegarán la inscripción de los correspondientes títulos.

"Los Agentes de Bolsa y Corredores de Comercio no intervendrán en la contratación de efectos públicos, valores industriales y mercaderías, cuando alguno de los contratantes esté comprendido en el artículo anterior.

"Artículo 39. Los Bancos nacionales y los Bancos extranjeros domiciliados en España no autorizarán la retirada de depósitos de cualquier naturaleza, excepto las cuentas corrientes en dinero que figuren a nombre de las entidades que se relacionan en el artículo 19.

"Artículo 49. El presente Decreto no modifica las facultades dominicales y de administración que no quedan específicamente determinadas en su contexto."

("Gaceta de Madrid", 21 de agosto de 1931, págs. 1367-1368).

Los boletines eclesiásticos, no obstante, no publicarían el preámbulo que acompañaría a esta norma por la implícita y dura crítica que contenía de la actuación de SEGURA. De la expectativa creada por el decreto en los medios periodísticos y de este preámbulo daría, sin embargo, cumplida cuenta "El Sci", que se refirió a él en el editorial del 21 de agosto:

"Importante Decreto: Queda suspendida la venta de bienes de la Iglesia: La animación y el interés de los periodistas que hacen información en los pasillos del Congreso estaba concentrada ayer tarde en la adquisición del tan anunciado decreto del ministerio de Justicia relativo a los prelados españoles y a sus maniobras.

"El ministro de la Gobernación, al encontrarse con los periodistas y refiriéndose a dicho decreto, dijo:

"Sigo con la boca cerrada. Ahí está el ministro de Justicia, que será quien les dé el decreto. Por cierto, que producirá menos impresión de la que se esperaba.

La noticia de los hechos expuestos, agravada por la relativa al levantamiento armado en Navarra y el País Vasco¹²⁹³ provocó una nueva campaña de prensa contra el arzobispo de Toledo y contra el obispo de Vitoria.

Al dar "El Sol" el 16 de agosto la noticia de la detención del Dr. ECHEGUREN había avanzado que los documentos intervenidos podían ser instrucciones de SEGURA sobre los bienes de las congregaciones religiosas y la con-

«Cuando ya habían terminado de sonar los timbres llamando a sesión a los diputados, salía del despacho de ministros el de Justicia; pero no con la copia del decreto en la mano, porque parece que el presidente no lo había firmado, y, por lo tanto, no quería facilitarlo a la Prensa hasta que este requisito indispensable se cumpliera. Pero precisamente en aquel momento llegó el Sr. Alcalá Zamora, firmó el decreto y el Sr. De los Ríos al poco rato salió con una copia de él, que facilitó a los periodistas y que dice así:

«Los esfuerzos notorios que han realizado elementos destacados de la Iglesia española a fin de lograr que se generalizase en el seno de ella una actitud leal, subordinación y acatamiento a la soberanía del Estado español organizado en República han tropezado desde el comienzo con la oposición irreducible de algunos jerarcas supremos de esta Iglesia.

«Esa hostilidad de determinados y concretos directivos, si al comienzo fue manifestada con debilidad, ha llegado a revestir en estos días, utilizando vías subrepticias, caracteres tan graves, que sólo ante testimonios irrecusables ha podido el Gobierno dar crédito a la situación que pretendían crearse, singularmente en la esfera económica.

«Mas como las incitaciones y consejos taxativos de quienes debieran ser símbolos de prudencia y mesura por la función que ejercen y el lugar que ocupan en la Iglesia española podrían mover a obediencia indebida a quienes hasta ahora se han mostrado respetuosos con la nueva legalidad creada, el Gobierno cumple un deber imperioso al evitar aquellos actos simulados que se aconseja realizar, contrarios a toda ley civil y penal; en su virtud, el presidente del Gobierno de la República, a propuesta del ministro de Justicia decreta: sigue a continuación el texto del articulado».

Hay que indicar que, a pesar de los términos de esta disposición, la misma fue aplicada muy laxamente, autorizándose sin dificultad la venta de bienes eclesiásticos. (Ver *Iglesia y Eslal durant la segona...*, II, pág. 342 y CASTELL, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea 1767-1965*, Madrid, 1973, pág. 389).

(293) Ver la nota 274.

veniencia de proceder a ventas muy rápidas, al día siguiente ampliaría esta información señalando que el gobierno no quería hacer manifestaciones sobre el contenido de los sobres incautados y que indicaba que el Dr. ECHEGUREN no estaba detenido sino "retenido"; el periodico añadía que este estaba alojado en la finca de D. Enrique de ZULUETA, "" que el hecho de la detención había causado una gran conmoción en la diócesis, "sobre todo en el sector de las derechas", y que "un jesuita muy conocido en San Sebastián" había informado que mensualmente Roma enviaba cartas con instrucciones reservadas para los preladados, suponiendo que en este caso se trataba de esa clase de ordenes "pero que de ninguna manera puede tratarse de instrucciones para la venta de bienes religiosos ni cosa parecida". ""

Fese a la actitud del gobierno de no dar publicidad al contenido de los documentos de SEGURA, uno de los hitos más algidos de estos días vino representado por las declaracio-

(294) La versión de los hechos dada por el boletín eclesiástico de Vitoria indicaba que la residencia del Dr. ECHEGUREN en estos días había sido la de D. Luis de ZULUETA (s. r.). "La retención del Sr. Vicario general y de un documento eclesiástico en la frontera de Irún", BOE de Vitoria, año 67, 1 de septiembre de 1931, núm. 19, págs. 609-611). Incluímos esta versión, que da cuenta de las manifestaciones hechas por el vicario general, en el apéndice núm. 30. Este boletín también publicaba la queja elevada el 15 de agosto por la Junta provincial de Acción Católica de Guipúzcoa al ministro de la Gobernación por el silencio del gobierno sobre el destierro de su obispo, pidiendo que no se diera pábulo a la campaña de oposición contra él, sino a la voz de los católicos vascos y, en consecuencia, se permitiera el pronto regreso a su diócesis; solicitada asimismo la pronta liberación del vicario general, detenido a causa de la correspondencia que llevaba al Dr. MUGICA, (15 de agosto de 1931, "Vida Diocesana.- Carta abierta de la Junta Provincial de Acción Católica de Guipúzcoa al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación", Ibid. págs. 606-609. Ver el apéndice núm. 31).

(295) "El Sol", 16 de agosto de 1931.

nes realizadas por Miguel MAURA en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián el 17 de agosto y en la que el ministro revelaría sin ambages que los documentos intervenidos eran ordenes e instrucciones del cardenal primado para que se procediera a la venta de los bienes eclesiásticos y se exportara su producto al extranjero, por lo cual, si el cardenal SEGURA volvía a España, sería para ir a la cárcel al estar incurso en delito de contrabando y defraudación; a ello añadiría que no se había violado ningún derecho al abrir la valija del vicario pues la autoridad tenía ordenados estos registros para evitar la evasión de capitales y que al abrir el sobre para ver si contenía billetes de banco fue cuando se encontraron las circulares delictivas del cardenal primado por lo que, ante la gravedad de los documentos aprehendidos, el Consejo de ministros tenía que deliberar antes de hacer pública la actitud del gobierno. (296)

La nueva intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos hizo actuar otra vez al cardenal VIDAL que el 18 de agosto se volvió a dirigir a ALCALÁ ZAMORA para exponerle, en nombre propio y en el de sus sufragáneos, la queja por la detención del Dr. ECHEGUREN y la confiscación de documentos de índole reservada para el Dr. MUGICA, así como por la publicidad dada a los hechos, que lastimaba el sentimiento de los católicos. (297)

(296) "El Sol", 18 de agosto de 1931.

(297) *Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 223. En la respuesta del presidente del gobierno provisional este abundaba en la información dada por MAURA a la prensa, indicando que el descubrimiento fue fortuito, producto del registro rutinario que por razones fiscales hacían los carabineros de los pliegos "abultados y ocultos" versión que se corroboró por la dada por el boletín eclesiástico de Vitoria que, como hemos indicado en la nota 294, reproducimos en el apéndice núm. 30. (Carta de 21 de agosto, Op. cit., págs. 247-248).

Con independencia de esta gestión también trató del caso con ALCALA ZAMORA el Dr. CARRERAS, sacerdote tarraconense enviado por el cardenal a Madrid en aquellas fechas, vísperas del inicio del debate del proyecto de Constitución, a fin de entrevistarse con el presidente del Gobierno provisional, el nuncio, el ministro de Estado y varios parlamentarios de derechas.⁽²⁹⁸⁾ Como CARRERAS informaba a VIDAL, hubo de recibir los primeros choques del asunto de los documentos de Vitoria, por ser candente ese problema en el momento de sus visitas al presidente y al ministro de Estado, Alejandro LERROUX, para quienes el hecho revestía una singular trascendencia porque al estar fechado el informe de Marín Lázaro el día 8 de mayo, antes del incendio de iglesias y conventos, no podía tener justificación alguna, por lo que el primado "so pretexto de mayor seguridad para los bienes eclesíasticos, intentaba de hecho una ofensiva gravísima contra el crédito y la hacienda del Estado, incluso por medio de actos delictivos y fraudulentos", lo cual venía a agravarse al indicar el cardenal que su actuación respondía a la autorización dada, "aun de viva voz", por la Santa Sede, afirmación de tanta mayor gravedad "por cuanto según ponía CARRERAS en boca de ALCALA ZAMORA- desde el advenimiento de la República su gestión se ha distinguido por el afán de aparecer ostentando la representación del pensamiento de Roma y de la jerarquía de España en forma tan personal y exclusiva... que viene a oscurecer la gestión cordial y comprensiva del Nuncio, con quien el Gobierno se complace en sostener las mejores relaciones".

(298) Sobre las diligencias del Dr. CARRERAS en Madrid ver el capítulo "La Constitución de 1931".

Por todo ello el presidente adelantaba a CARRERAS cual habia de ser la postura del gobierno en el asunto del cardenal SEGURA y que seria definitivamente fijada, segun se desprende de su informe, en el Consejo de ministros reunido con caracter extraordinario el dia 21 de agosto, para tratar, precisamente, de la situacion creada a raiz del conocimiento de los documentos incautados y que implicaria la peticion a ROMA de la inmediata remocion del cardenal:

"El equívoco no puede continuar: o bien el Papa esta de verdad solidarizado con la actitud del Cardenal, y entonces toda conciliación hacese imposible, o el Cardenal es solo responsable, y entonces la desautorización ha de ser precisa y visible, a fin de que desaparezca todo obstáculo a las buenas relaciones entre Roma y la Republica. El Gobierno no podia aceptar de ninguna manera que, al mismo tiempo de estarse tramitando la nota del Gobierno sobre el Cardenal, este recibiese de la Santa Sede instrucciones de tanta gravedad como las que el afirma en los documentos aprehendidos."

A ello se unia, por otra parte, por mas ajenos que fueran a la cuestion, la forma en que, tanto a SEGURA como al obispo de Vitoria, les comprometia su permanencia cerca de la frontera, en relacion con los intentos levantiscos del norte. "tanto mas cuanto nadie, y menos el gobierno, desconoce las repetidas idas y venidas de caracterizados elementos vascos para visitar al Sr. SEGURA". Era, pues, necesario evitar todo cuanto pudiera hacer aparecer a los catolicos, y singularmente a la jerarquia, como enemigos del regimen, maxime cuando este podia esperar una adecuada formula de conciliacion tratando con el nuncio y con otros prelados.

Aunque, como indicaria a VIDAL, la postura adoptada por CARRERAS en su entrevista con el presidente del Gobierno provisional habia ido encaminada "a que no hiciera responsable a Roma y a toda la jerarquia de incidentes particulares, cuyo alcance convenia reducir a limites estrictos", toda la actuacion de SEGURA, y especialmente el envio de los documentos incautados, venia a dificultar enormemente cualquier influencia que pudiera ejercerse tendente a modificar el articulado de la Constitucion, para hacerlo mas favorable a la Iglesia, y si bien el ministro de Estado, LERROUX, afirmaria que "por punibles que deban ser las medidas... se podra evitar aislar el caso SEGURA, y entablar en Roma negociaciones para su definitiva resolucio[n]", no cabia duda de que este "caso" habia influido muy negativamente en las perspectivas del proximo debate constitucional pues, como el sacerdote catalan decia al arzobispo de Tarragona, el estado de opinion pesimista y contrario a la actuacion del primado reinaba tambien en los diputados "de derechas", que, amen de referirse a las dificultades anadidas que implicaba el asunto de los documentos, tambien estimaban inadecuada la pastoral del primado "al no dar integra la doctrina de Leon XIII" y por su falta de "interes por la concordia y conciliacion en torno al problema religioso para bien de la iglesia y de la Republica", estimacion que algun parlamentario eclesiastico hacia extensiva a sus respectivos prelados "favorables a tendencias de suavidad, dificiles de ser representadas por la direccion demasiado personal del Cardenal SEGURA".

Sucintamente insistiria ALCALA ZAMORA en la actuacion de SEGURA y en el posible levantamiento en el norte en la carta que envio al cardenal VIDAL el 19 de agosto, dandole

cuenta de la entrevista mantenida con el Dr. CARRERAS, y en la enviada el día 21. Por carta del día 26 le remitiría, según petición efectuada por el sacerdote catalán, todos los documentos incautados. VIDAL respondería a esta correspondencia por carta de 28 de agosto manifestando al presidente cómo, al igual que él, consideraba "un desastre para la Patria y para la Religión la guerra civil", consideración que, "al ver la excitación de los ánimos y notar intentos de preparación", había expresado reiteradamente y en la cual abundaban el resto de los prelados.⁽³⁰¹⁾ Tras reiterar su queja por las últimas disposiciones tomadas sobre los bienes de la Iglesia, que habían sido "adquiridos y poseídos por las Instituciones religiosas, al amparo de las leyes todas", y sobre las temporalidades de SEGURA y MUGICA, el cardenal insistía en que el único representante de la Santa Sede en España era el nuncio, no existiendo primacía alguna en otro prelado que no fuera meramente de honor.⁽³⁰²⁾

De todas las comunicaciones cruzadas con el presidente del Gobierno provisional así como de la publicación del documento "colectivo" de SEGURA, detención del Dr. ECHEGUREN, gestiones del Dr. CARRERAS y las consecuencias de todos estos hechos, daría cuenta el cardenal al Secretario de Estado vaticano en su aludida carta del 9 de septiembre, carta en la que se dolía de que el Gobierno hubiera conocido las facultades concedidas por la Santa Sede.⁽³⁰³⁾

Si bien durante la elaboración del mensaje a las Cortes constituyentes que elevarían los obispos de la provincia ta-

(301) Sobre los extremos expuestos por el cardenal ver la nota 274. La expresión exacta de VIDAL era: "mis sufragáneos y creo que también todos los Prelados..."

(302) Op. cit., págs. 224; 248 y 264-266.

(303) Op. cit., págs. 295-299.

rraconense⁽³⁰⁴⁾ VIDAL había querido que se aludiera al regreso del primado y del obispo de Vitoria a sus respectivas diócesis, la incautación de los documentos al Dr. ECHEGUREN haría que tal mensaje no hiciera mención de dicho regreso,⁽³⁰⁵⁾ no obstante las personales protestas que, como hemos visto, elevara el cardenal al presidente del Gobierno provisional.

Para acabar de referirnos a todos estos hechos tenemos que decir, por último, que esta actuación política del arzobispo de Tarragona poco tenía que ver con su íntimo pensamiento, toda vez que en su fuero interno no dejaba de reprochar a SEGURA que hubiera sido causa de todo lo sucedido, como se infiere claramente de la carta que, ya el 16 de agosto, escribiera a TEDESCHINI lamentando que toda la documentación y encargos de la Santa Sede hubiera caído en manos de la policía y recriminando la actuación del prelado al indicar que, viviendo los dos obispos en Francia, hubiera sido mucho más fácil que se comunicaran por correo, además de que hubiera sido suficiente transmitir a los obispos las facultades que tenían sin hacer las menciones que había hecho y no dar a conocer, además, el nombre del abogado que había realizado el dictamen sobre los bienes eclesiásticos para no comprometerlo, como había sucedido.⁽³⁰⁶⁾

(304) ver el capítulo sobre la Constitución.

(305) Co. cit., pag. 143.

(306) Co. cit., pag. 216. En la indicada carta al Secretario de Estado vaticano VIDAL le señalaba que Marín Lazaro se había visto obligado "a expatriarse y perder la manera de ganarse el sustento de su familia mediante el ejercicio de su profesión".

9.7. La remoción del primado

Ya hemos visto como en las entrevistas de que CARRERAS daba cuenta en su informe al cardenal VIDAL, ALCALA ZAMORA habia insistido en la necesidad de que la Santa Sede se pronunciara sobre la actuacion de SEGURA: o estaba solidarizada con el y entonces todo entente era imposible o, de no aprobar sus obras, debia proceder a efectuar la correspondiente desautorizacion del primado en forma "precisa y visible"; LERROUX, por su parte, habia aludido a las negociaciones a efectuar con el Vaticano para resolver definitivamente el asunto SEGURA, "por punibles" que pudieran ser las medidas a adoptar.

Como consecuencia de esta toma de postura ante la actuacion del arzobispo de Toledo, el gobierno pidio a Roma, a través de la nunciatura, la definitiva remocion del cardenal SEGURA.

En vista de tal peticion la primera medida que adoptaria la Santa Sede fue comunicar al primado, a través del nuncio de Paris, que se abstuviera de actuar y publicar documentos,⁽³⁰⁷⁾ razon por la que la ultima pastoral de este habria de ser la que dirigiera al clero de su archidiocesis el 25 de agosto de 1931;⁽³⁰⁸⁾ no obstante el Vaticano no es-

(307) Asi se infiere de la carta dirigida por VIDAL a TEDESCHINI el 29 de agosto. Op. cit., I, pag. 268. A este hecho y a las penurias que, tras esta imposición, iba a sufrir el primado, se refiere Ramón GARRIGA en su obra *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977, págs. 176-177.

(308) Ver la nota 254.

taba dispuesto en el momento inicial a acceder a las peticiones de Madrid, a quien, al parecer, propuso sustituir la presencia del cardenal por un administrador apostólico en Toledo, pero sin proceder a remover a aquel.³⁰⁹

Ante esta situación el cardenal VIDAL fue llamado a Madrid por ALCALÁ ZAMORA a fin de que se entrevistase con el y con el ministro de Justicia, Fernando DE LOS RÍOS, entrevista en la que ambos le expusieron que no cabían fórmulas intermedias en la cuestión del primado y que si no se procedía a su remoción, no podían garantizar a la Iglesia que en las Cortes constituyentes se alcanzara una solución moderada para el tema religioso, corriéndose el riesgo de que aprobaran sin modificaciones el proyecto de constitución presentado el 18 de agosto, con las consecuencias tan desfavorables que ello implicaba. Si, por el contrario, se lograba finalizar el asunto del primado, el mismo Fernando DE LOS RÍOS asumiría en el Parlamento la defensa de todas las Congregaciones religiosas.

De esta postura gubernamental daría cuenta VIDAL al cardenal FACELLI telegráficamente el 10 de septiembre y en su exposición el mismo insistiría en que sin la transigencia de la Santa Sede en la cuestión de SEGURA, no era posible obtener garantías acerca de la Constitución ni respecto al nuevo nombramiento del católico ALCALÁ ZAMORA como presidente.³¹⁰

(309) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pág. 300.

(310) *Op. cit.*, I, págs. 300-301.

A tal telegrama seguiría una extensa carta del cardenal en nombre de la Comisión de metropolitanos constituida en Madrid, cara al debate de la constitución (VIDAL ya actuaba en ella como presidente)''' pormenorizando al Secretario de Estado los detalles esbozados en aquel y en la que le expondría las razones del gobierno para insistir en la necesidad de la remoción del primado, basadas, fundamentalmente, en la gravedad de los documentos aprehendidos al doctor ECHEGUREN y en la contestada hostilidad del cardenal SEGURA contra el régimen, dados los contactos que sin cesar mantenía con elementos monárquicos e integristas;''' opiniones estas que, al ser compartidas por

(311) Ver el capítulo "La Constitución de 1931".

(312) Según exponería VIDAL a PACELLI en carta de 22 de Septiembre, la situación se había agravado porque, a pesar de la actitud del gobierno de no dar publicidad a los documentos incautados, habiéndose incluso negado a entregarlos a debate de la Cámara, según petición hecha por el diputado vasco LEIZAOLA, su contenido había sido revelado por "El Siglo Futuro", el día 4 de septiembre y reproducido en muchos periódicos de Madrid y provincias, con lo cual se había avivado la expectación por el resultado de las negociaciones con la Santa Sede y ante el agitado debate que se esperaba. La publicación efectuada por el órgano de expresión del integrismo español lo había sido, además, a raíz de una visita de su director, Manuel SÉNANTE, al cardenal SEGURA en Bayona. (Op. cit., I, págs. 329-330) "El Siglo Futuro" sería suspendido el 10 de septiembre por orden gubernativa ("El Sol", 11 de septiembre de 1931). Junto a Manuel SÉNANTE era destacado miembro del integrismo español José María de URQUIJO, director de "La Gaceta del Norte" -periódico que, como se recordará, había publicado el texto de la pastoral colectiva de 25 de julio previamente a que sufriera las posteriores modificaciones-, que llegó a a desplazarse al Vaticano para contrarrestar la petición de remoción formulada por el gobierno provisional. También se desplazará a Roma, precisamente en misión contraria, el director de "El Debate", Angel HERRERA. "La Gaceta del Norte" sería suspendida en agosto a causa de hacer campaña contra la república. Op. cit., I, pág. 304, notas 10 y 11, con referencia a las *Memorias de Azaña*. Ver en la nota 7 de las págs 329-330 la citada petición al gobierno del diputado LEIZAOLA y en la nota 8 de la última página indicada los detalles de la publicación del contenido de las circulares de SEGURA por "El Siglo Futuro" y "ABC".

los miembros de la Cámara hacían imposible alcanzar una mayoría que lograse modificar los artículos relativos a la cuestión religiosa que figuraban en el proyecto, a no ser que el Vaticano diera pruebas de su deseo de llegar a fórmulas de concordia mediante la remoción de SEGURA, con las correspondientes garantías por parte del gobierno respecto a los asuntos de mayor relevancia para la Iglesia, a quien se le pedía un gran sacrificio en la figura del primado.

Los últimos párrafos de esta carta del arzobispo de Tarragona son altamente expresivos de su juicio sobre la actuación de los integristas que rodeaban y aconsejaban al cardenal SEGURA y revelan, al tiempo, su excesiva confianza en los resultados a obtener de la Cámara una vez el Vaticano hubiera accedido a la petición gubernamental:

"No he de ocultar a V. Ema. que existe un grave obstáculo que conviene apartar con energía, si no se quiere echar todo a perder. Me refiero a la posición derrotista iniciada y propagada con ciega tenacidad por elementos extremistas en determinados ambientes católicos y religiosos. El intento de tales elementos es la ruptura entre la Santa Sede y el Gobierno; su táctica, el desacreditar toda acción diplomática y conciliadora contraponiendo a ella la persona y la actuación del Cardenal de Toledo, y la propagación alarmista de actitudes débiles del Nuncio; sus fundamentos, el próximo hundimiento de la República y el posible triunfo de la tesis católica. Representativa de tal acción extremista, que hemos podido comprobar, es la alarma producida acerca de la supuesta situación de la Compañía de Jesús, como víctima dirigida al Gobierno para salvar a las demás Congregaciones; de ello solo es cierto que, si no hay concordia, la primera Orden suprimida sería la amada Compañía cuya defensa todos tenemos en el corazón y en los actos.

«Debo confesar, Eminencia, que tal actitud extremista es injustificada y contraproducente. Ninguna persona autorizada y bien informada de la situación actual considera posible ni beneficioso

cualquier intento de restauracion monarquica o dictatorial, que el Gobierno, asistido por la opinion publica, tiene medios suficientes para impedir y sococar. De prevalecer el susodicho criterio derrotista, no son de prever otros resultados que la paralización de las conversaciones amistosas, perder el tiempo, que urge para tratar con el Gobierno, y el riesgo de que el Parlamento apruebe entre tanto un texto constitucional sectario, con todas las duras consecuencias de una guerra religiosa, nociva para la Iglesia y para el bien publico."⁽¹³⁾

Sobre el asunto SEGURA insistiria VIDAL al cardenal PACELLI en cartas de 19 y 22 de septiembre, reiterando en ellas el proposito del gobierno de defender a todas las congregaciones religiosas sin exclusion alguna de la Compania de Jesus.⁽¹⁴⁾ El 29 de septiembre y tras una entrevista con ALCALÁ ZAMORA, a peticion de este, para hablarle de la necesidad de una urgente solucion, un colaborador del cardenal y este mismo en union del arzobispo de Sevilla, Dr. ILUNDAIN, telegrafarian al Vaticano instando la pronta resolucion basada en que el gobierno consideraba el silencio de Roma como motivo de descredito publico "y como efecto innegable del valimiento mayor cerca de [la] Santa Sede de elementos hostiles [a la] República", dandose por parte de "alguna minoria"⁽¹⁵⁾ por irracasadas las negociaciones, lo que les llevaba a inclinarse a la intransigencia; como ultima tentativa -añadia el telegrama- ALCALÁ ZAMORA habia pedido a la Camara el aplazamiento del debate sobre la cuestion religiosa, de ahí la necesidad de que durante dicho aplazamiento se llegara a una solucion satisfactoria, pues

(13) Op. cit., I, págs. 303-308.

(14) Op. cit., I, págs. 313-318 y 328-334.

(15) Aluden los cardenales a las minorias socialista y radical-socialista. Op. cit., I, pag. 330, nota 2.

de no ser así sería "inútil toda tentativa de reconciliación", de ahí que, finalizaban los prelados: "sería buena solución que el Cardenal renunciase la su Sede".⁽³¹⁶⁾

Indican BAILLORI y ARBELLOA que no existe seguridad de que este telegrama fuera cursado, para añadir seguidamente que aquella misma noche llegaba a Madrid la noticia de la renuncia del primado a su sede, noticia que el nuncio transmitiría el día 30 al cabildo catedral de Toledo, que se reunió al día siguiente para conocer oficialmente el comunicado de la nunciatura⁽³¹⁷⁾ y que el día 5 de octubre

(316) Op. cit., I, pag. 337-339. Ver en la nota 3 de la pag. 338 la forma en que tuvo lugar el acuerdo parlamentario sobre el aplazamiento del debate de la cuestión religiosa.

(317) El texto transmitido por el nuncio era del tenor literal siguiente:

"El Embo. Sr. Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad acaba de telegrafiarne, y yo me apresuro a poner en conocimiento de Su Señoría, que el Embo. Sr. Cardenal Segura, imitando el ejemplo de San Gregorio Nacianzeno, con noble y generoso acto, del cual el solo tiene el mérito, ha renunciado a la Sede Arzobispal de Toledo. Ruego, por tanto, por conducto de Su Señoría al Excmo. Cabildo Metropolitano de Toledo para que, según las prescripciones de Derecho Canónico, proceda sin demora a la elección de Vicario Capitular..." (Op. cit., I, pag. 340, nota 1).

También reproduce íntegro el texto de esta comunicación Víctor Manuel ARBELLOA, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931)*, Barcelona, 1976, pag. 38, haciendo un irónico comentario tanto sobre su brillantez como sobre la del servicio llevado a cabo por ambas potestades en pro de la paz y la concordia. En la traducción que el mismo ARBELLOA hizo de la obra de Ramon MUNTANYOLA: *Vidal i Barraquer. El cardenal de la paz*, (Barcelona, 1971) incluye esta sugestiva descripción de la renuncia del primado en contraposición a la nota transmitida por FEDESCHINI: "La renuncia 'voluntaria' de SEGURA le costó lo suyo al Vaticano. Fue preciso el viaje de monseñor MAGLIONE, nuncio en París, a donde se encontraba el cardenal, para 'arrancarle' la petición de renuncia a su sede dirigida a la Santa Sede (testimonio personal de don Acacio Marquero, secretario particular de SEGURA, a quien acompañó en su destierro, y hoy canónigo de Toledo, en conversación con el productor de este libro, en la misma ciudad, el día 31 de marzo de 1967). SEGURA no quiso aquel día comer con el delegado pontificio. Se fue a la capilla y al salir firmó la petición. Durante su vida el cardenal comentó varias veces aquella renuncia 'voluntaria' con amarga ironía -Pío XI y el nuncio FEDESCHINI lo compararon

procedería a elegir como vicario capitular de la archidiócesis al obispo auxiliar Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO.

con San Gregorio Nacianceno, que renunció a su sede de Constantinopla- pero el cardenal SEGURA le recordó al papa, después de la felicitación navideña de los cardenales en diciembre de 1931, que San Gregorio había renunciado voluntariamente, mientras que él lo había hecho sólo por complacer a la Santa Sede", Op. cit., pag. 216, nota 34.

De la renuncia del cardenal SEGURA, publicando la comunicación del nuncio y dando cuenta de la elección del vicario capitular de la archidiócesis, tratarían por aquellas fechas entre los consultados, los boletines eclesásticos siguientes:

BOE de Palencia, año 81, 9 de octubre de 1931, núm. 22, pag. 675: "Crónica General. El Cardenal Segura"

BOE de Vitoria, año 67, 15 de octubre de 1931, núm. 22, pag. 650: "La renuncia del Sr. Cardenal Primado"

BOE de Orizuela, año 50, 16 de octubre de 1931, núm. 18, págs. 336-337: "Renuncia del Eminentísimo Cardenal Segura al Arzobispo de Toledo"

BOE de Avila, año 42, 22 de octubre de 1931, núm. 12, págs. 460-461: "Crónica nacional. Renuncia del Eminentísimo Cardenal Segura de Arzobispado de Toledo"

BOE de Valencia, Epoca II, 15 de noviembre de 1931, núm. 2135, pag. 377: "La renuncia del Embo, Cardenal Primado". Sobre el hecho comentaría este Boletín

"No hay que decir la hondísima impresión que tal noticia nos ha producido. La renuncia del Prelado modelo, del Cardenal que vivió pobre, porque en su caridad inagotable repartía entre los necesitados cuanto tenía, del sacerdote de vida austera y penitente y de piedad sentida y acendrada, ha llegado a lo más íntimo del alma de los católicos.

"Sinceramente acatamos el hecho y su aceptación por la Santa Sede; somos, queremos seguir siéndolo, ahora más que nunca, hijos fieles y sumisos de la Iglesia, y nos inclinamos reverentemente ante el más mínimo de sus actos y la más insignificante de sus decisiones.

"Y pedimos al Señor que, con la mayor abundancia de sus dones celestiales, quiera compensar al insigne Purpurado y Director Pontificio de la Acción Católica en España, de tantos sinsabores y amarguras como ha tenido que devorar por el nombre de Cristo, y del celo con que ha sabido defender en todo tiempo, con apostólica entereza, los sacrosantos [sic] de la Iglesia".

El boletín eclesástico de Toledo había dado cuenta, fechando la noticia el 5 de octubre, de la elección, por el cabildo primado, del vicario capitular, elogiando las virtudes del Dr. ROCHA PIZARRO y manifestándole su "fidelidad adhesión", más no publicó la carta del nuncio, ni hizo comentario del hecho, BOE de Toledo, año 67, 16 de octubre de 1931, núm. 19, pag. 345.

Otros boletines eclesásticos, esperarían a hacer referencia a la renuncia del primado una vez se recibió la carta del papa sobre el a que más adelante aludiremos.

Una vez conocida la renuncia del primado, el mismo 30 de septiembre ALCALÁ ZAMORA y Fernando DE LOS RÍOS la darian a saber a las Cortes constituyentes presentando el hecho como una invalidación por parte de la Santa Sede de la actuación de los elementos integristas y resaltando lo inusual de lo concedido, con escasos precedentes en la historia de la Iglesia; al tiempo manifestarian que por parte del Estado no pensaba hacerse uso del derecho de presentación.⁽³¹⁸⁾

Vencido el insoslayable escollo de la desaparición de la escena española del primado y conseguido el aplazamiento del debate de la cuestión religiosa en las Cortes, VIDAL, en su calidad de presidente de la Conferencia de metropolitanos, escribió el mismo 30 de septiembre una amistosa carta al ministro de Justicia, Fernando DE LOS RÍOS, agradeciéndole sus gestiones en favor de la concordia y dándole cuenta de sus esfuerzos personales en el mismo sentido; en ella le expresaba su esperanza en el éxito final

(318) Ver la narración de estos hechos en *Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 343, nota 16. También se refiere a ellos Víctor Manuel ARBELLOA, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931)*, Barcelona, 1976, págs. 38-39. En el apéndice núm. 32, incluimos la relación detallada, con las declaraciones del ministro de Justicia, que hizo "El Sol" el 1 de octubre de 1931. En esta misma fecha "El Debate" publicaría un editorial con el significativo título "Un preñado modelo", haciendo hincapié en el alto valor del gesto de la Santa Sede y en lo que su actitud revelaba respecto a sus "amistosos sentimientos para el Estado español" y a su deseo de colaborar en la pacificación de los espíritus. En su habitual sección "Lo del día" calificaría, por otra parte, de "infantiles, inoportunas, inadecuadas y ligeras" las declaraciones efectuadas por el ministro de Justicia, al haber enjuiciado el hecho bajo el prisma de una "victoria del Poder civil". Sobre el derecho de presentación a que había aludido el presidente (como se ve en el apéndice citado, "El Sol" daba la errónea versión de que el nuevo primado sería nombrado "de acuerdo con el Gobierno español") ver lo indicado en la nota 146.

dado el buen augurio que representaba el haber obtenido el aplazamiento del debate.⁽³¹⁹⁾

Al día siguiente el cardenal daría cuenta al Secretario de Estado vaticano de la tensión suirida por las autoridades políticas y eclesíasticas en las fechas anteriores a la recepción del comunicado de la Santa Sede, los contactos habidos y la impresión "alarmante", "por considerar el Gobierno que el silencio de Roma situaba el debate religioso, a punto de comenzar aquella misma tarde, en plano de desavenencia y en imposibilidad de aquietar los ánimos de los diputados extremistas, cuya actitud, en especial la de los socialistas, iba a impedir al ministro de Justicia defender en el Parlamento los puntos propuestos por la Santa Sede en las fórmulas de conciliación".⁽³²⁰⁾ Ante tal alarma VIDAL había reiterado a ALCALA ZAMORA la necesidad de confiar en la Santa Sede y de lograr el aplazamiento del debate en la Cámara a fin de preparar mejor su disposición ante la cuestión religiosa, cuestiones ambas a las que este había accedido, así como a una marginal relativa a "evitar la agitación que se preparaba contra la Compañía, impidiendo, reservadamente, la representación escénica de una obra de un diputado y Embajador en Londres, Sr. PEREZ DE AYALA, cuyas consecuencias habrían sido funestas".⁽³²¹⁾ Así las cosas, y dada la buena disposición apreciada en el Gobierno, los metropolitanos habían manifestado a Roma la necesidad de una urgente solución por medio del telegrama enviado el día 29. Tras todas estas actuaciones la noticia

(319) *Església i Estat durant la segona...* I, págs. 339-340.

(320) Ver sobre este extremo el capítulo sobre la Constitución.

(321) Ver el apéndice sobre las órdenes y congregaciones religiosas.

final de la dimision del primado, anunciada ante el Parlamento por el presidente del Gobierno provisional, habia causado en este una positiva reaccion que era descrito por VIDAL en estos expresivos terminos: "...una impresion sedante enorme... hasta tal punto que quedo en ultimo termino cualquier otro interes politico"; y es que el cardenal tenia el logico interes en resaltar ante el Secretario de Estado lo positivo de la solucion que el mismo, siguiendo igual criterio del nuncio, habia instado con reiteracion: "las previsiones anunciadas a Vuestra Eminencia acerca del efecto pacificador que habia de producir la resolucion de la Santa Sede, han sido confirmadas con creces" y, asi, podia darle cuenta de la satisfaccion del gobierno y su interes en acentuar la generosidad del Vaticano, apreciandose con caracter general la magnanimidad con que habia actuado en pro de la paz espiritual de la Republica y que su ejemplo constituya "la mejor invitacion a la moderacion y armonia con que debe resolverse la cuestion religiosa en el Parlamento". Tal solucion, por otra parte, habia renovado la confianza en la opinion en torno al presidente del Gobierno y al ministro de Justicia, lo que les hacia recobrar posiciones para el exito de sus intervenciones ante las Cortes, y habia acentuado el ambiente, entre catolicos y no catolicos, de que urgia encontrar la formula constitucional que debia llevar la paz a los espiritus "sin lesionar los legitimos intereses de la Iglesia", ambiente respecto al que no habia de tenerse en cuenta "ciertos extremismos de unos pocos elementos de derecha", que no dejaban de manifestar su contrariedad "por la tendencia general de concordia y por las resoluciones emanadas de la Santa Sede".⁽³²²⁾

(322) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 340-345; tambien citada por Victor Manuel ARBELLOA, en la obra y pags. indicadas en la nota 317. Este mismo autor describe el impacto causado entre los diputados por la noticia de la dimision del cardenal SEGURA y la reaccion de la izquierda mas encarnizada de

Nos queda por aludir, para acabar de referirnos a la actuacion del cardenal SEGURA desde el exilio y a esa renuncia suya que tan poco tuvo de espontanea,⁽³²³⁾ a la carta que con fecha 1 de octubre le enviara Pio XI y en la que el papa mencionaba la "libre" decision tomada por el cardenal:

Entre los boletines eclesiasticos consultados el primero en dar la noticia del escrito del papa y publicarlo fue el de la diócesis de Segovia que, a su vez, lo tomaba de "L'Osservatore Romano" con estas palabras:

"L'Osservatore Romano publica el texto de la carta dirigida por Su Santidad con fecha primero de Octubre, el Emmo. Cardenal Segura, en la que acepta la renuncia enviada por carta de 26 de Septiembre. Los terminos de la misma son los siguientes:

«Ha llegado a Nuestro poder la carta de Vuestra Eminencia Reverendísima, de fecha 26 de septiembre próximo pasado, por la cual ponía en Nuestras manos su libre renuncia a la Sede Arzobispal de Toledo.

«Los sentimientos de filial piedad y devoción que en ella expresa Nos han conmovido vivamente, y Nos apresuramos a significar a Vuestra Eminencia nuestro altísimo aprecio por esa noble acción, ejecutada con tanta generosidad y animada de tan puras y sobrenaturales intenciones. En ese acto de Vuestra Eminencia hemos visto una nueva y luminosa prueba de celo por las almas ya que, con la esperanza de cooperar al mayor bien de ellas o aun solo para quitar pretexto de mayores males, imitando el ejemplo de san Gregorio Nazianceno, no ha vacilado en sacrificarse a si mismo.

que tal dimisión, dada su necesidad, no tenía valor, siendo sintoma de que, para ella, el gobierno había partido concesiones a la Iglesia en visperas del debate de las cuestiones que le afectaban, por lo que era preciso no dejarse sorprender, Op. cit., pag. 53.

(323) Ver a este respecto lo indicado en la nota 317.

«Al aceptar Su renuncia, queremos que Le llegue una palabra Nuestra de complacencia por todo el bien que Vuestra Eminencia ha hecho en beneficio de la Iglesia, y de paternal aliento en Su dolor al separarse de Sus queridos Hijos del Clero y del Laicado con quienes le unen tantos y tan suaves vínculos de pastoral afecto.

«Y pidiendo a Dios abundancia de celestiales dones para Vuestra Eminencia, Le enviamos con toda la efusión de Nuestra alma y en prenda de Nuestra particular benevolencia la Bendición Apostólica».

«'L'Osservatore Romano' dice que la carta de Su Santidad confirma que el cardenal Segura quiso con su renuncia apartar cualquier pretexto para mayores males.

«Es notorio, en efecto, continúa un órgano oficioso del Vaticano, como el sectarismo ha hecho del cardenal Segura un exponente de la oposición a la República, presumiéndose que daba pretexto con su conducta a los extremistas para combatir cualquier tentativa de acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno de la República.

«Pero esto no es nada más que un pretexto, porque el cardenal Segura prefirió sacrificarse, y, gracias a este sacrificio y a su noble gesto, la situación ha quedado completamente aclarada, definitivamente, y los verdaderos sentimientos de los adversarios de la Iglesia han quedado descubiertos sin excusa alguna.»⁽³²⁴⁾.

(324) BOE de Segovia, año 76, 30 de octubre de 1931, núm. 20, págs. 450-451. Igual publicación -con ligeras modificaciones del texto del comentario, debidas quizá a la traducción de 'L'Osservatore', efectuaría el boletín eclesialístico de la diócesis de Astorga; BOE de Astorga, año 79, 16 de noviembre de 1931, núm. 22, págs. 391-392, indicando, como había hecho el de Segovia, que estaba tomada de "L'Osservatore Romano" del día 20 de octubre; este último boletín había dado ya una escueta noticia del hecho y del nombramiento del Dr. RODRÍGUEZ PIZARRO como vicario capitular de Toledo, publicando en el número anterior una nota insertada en "L'Osservatore Romano" del 3 de octubre en la que se decía: "Su Eminencia el Cardenal Segura ha presentado al Santo Padre su libre renuncia a la sede arzobispal de Toledo. El Santo Padre la ha aceptado, apreciando en el más alto grado el noble gesto, que el Cardenal ha efectuado con verdadera generosidad y espíritu sobrenatural". "Crónica Nacional". El Arzobispado de Toledo vacante", BOE de Segovia, año 76, 15 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 420-421.

El boletín eclesiástico de la diócesis de Palencia daría la noticia al día siguiente que el de Segovia, mas sin publicar la carta de Pío XI y añadiendo como propio comentario que la carta que el papa dirigía al primado era "altamente laudatoria para el Cardenal, en quien reconoce el Romano Pontífice un alto celo por la salvación de las almas, en aras del cual no ha vacilado el Emmo. Sr. SEGURA en sacrificarse a sí mismo, dando una prueba mas de lo que ha sido siempre su norma de vida: trabajar por los demás".⁽³²⁵⁾

El boletín eclesiástico de Toledo se limitaría, curiosamente, a publicar tan solo la carta del papa sin efectuar ni recoger comentario alguno.⁽³²⁶⁾

(325) "Crónica General. Carta del Papa al Cardenal Segura", BOE de Palencia, año 81, 31 de octubre de 1931, núm. 23, pág. 710. Este boletín indicaría que la fecha en que "L'Osservatore Romano" publicaba la carta del papa era la del 20 de octubre. El mismo comentario efectuado por el boletín eclesiástico de Palencia sería publicado por el de Orihuela, que también se refería a la fecha de 20 de octubre de "L'Osservatore", y que tampoco publicaría la carta de Pío XI, ("Carta del Papa al Cardenal Segura", BOE de Orihuela, año 50, 16 de noviembre de 1931, núm. 20, pag. 364). La carta del Papa sería reproducida por el boletín eclesiástico de Palencia conjuntamente con la enviada por el nuncio al cabildo primado de Toledo el 1 de diciembre, ("Renuncia del Emmo. Cardenal Segura al Arzobispado de Toledo", BOE de Palencia, año 81, 1 de diciembre de 1931, núm. 25, pags. 755-757).

(326) "Una carta del papa al Emmo. Cardenal Segura", BOE de Toledo, año 87, 2 de noviembre de 1931, núm. 20, pags. 369-370. Este boletín indicaría que la fecha en que la carta había sido publicada por "L'Osservatore Romano" era la del 24 de octubre. También otros boletines eclesiásticos se limitarían a publicar la carta de Pío XI sin comentarios; tal harían los de Valencia ("Una carta del Papa al Eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal Segura", BOE de Valencia, época II, 15 de noviembre de 1931, núm. 2195, pag. 378), Málaga ("Carta de Su Santidad el Papa al Cardenal Segura aceptando la renuncia de la silla Primada", BOE de Málaga, año 64, 15 de noviembre de 1931, núm. 12, pags. 436-437), Granada ("La renuncia del Emmo. Cardenal Segura", BOE de Granada, año 86, 15 de noviembre de 1931, núm. 3491, pags. 778-779), Avila ("Documentos de la S. Sede.- Carta de Su Santidad Pío XI al Eminentísimo Cardenal Segura al aceptar la renuncia al Arzobispado de Toledo", BOE de Avila, año 42, 4 de diciembre de 1931, núm. 14, pag. 508) o Burgos ("Una carta del Papa al Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Segura", BOE de Burgos, año 74, 15 de diciembre de 1931, núm. 23, pags. 522-523).

Mas si tal habia sido el laconismo del boletin eclesiastico de la archidiócesis hasta entonces regida por el cardenal SEGURA como contrapartida y como era logico esperar, el primer miembro de la jerarquia en referirse a la renuncia del primado seria el recién nombrado vicario capitular, Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO, que en la carta de salutación dirigida al cabildo catedralicio y al clero de la archidiócesis -de eminente caracter religioso y por la que instaba sus oraciones y colaboracion en la empresa comun de lograr la salvacion de las almas que tenian confiadas- comenzo recordando, si bien someramente, al cardenal y destacando como en la carta del nuncio (al igual que, como hemos visto, hacia Pío XI) se le comparaba a San Gregorio Nacianceno, "santo Obispo de Constantinopla que renunció a su Sede en aras a la paz y concordia", apuntando como en dicha carta se indicaba que solo al primado cabia el merito de su acto y señalando que su renuncia "unicamente por miras altísimas se comprende".⁽³²⁷⁾

Con independencia de estas escuetas y necesarias palabras del Dr. ROCHA PIZARRO, fue el Dr. Isidro GOMA y IGUAS, obispo de Iarazona y administrador apostolico de Tudela, el primero que anadio su personal comentario a la publicacion de la carta del papa y de la nota cursada por la nunciatura al cabildo primado de Toledo, que el boletin de su diócesis efectuaba conjuntamente, ensalzando el gesto de SEGURA del que destacaba su caracter espontaneo y voluntario, y alabando la carta de Pío XI y la actuacion anterior del primado, del que estimaba habia de tener "la conviccion intima... de haber cumplido fielmente sus

(327) 9 de octubre de 1931, "Carta circular de salutación", BDE de Toledo, año 87, 16 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 346-348.

altos deberes". 1220

(328) "Por Nuestra parte solo añadimos un sencillo comentario a la magnífica carta que Su Santidad dirige a Nuestro venerable Hermano el Exmo. Sr. Cardenal Segura.

«Es carta de Padre santísimo que sabe escribir y describir en pocas frases la grandeza del acto que realizó el Arzobispo de Toledo; es una "acción noble", porque es el gesto digno y gallardo de quien, sospechando tal vez que su persona pudiese ser obstáculo a un mayor bien de la Iglesia, aunque con la convicción íntima, tenemos de ello la seguridad, de haber cumplido fielmente sus altos deberes, cede un lugar que debió ser el campo de su celo por toda su vida y en el que había trabajado con el ardor de un buen soldado de Cristo, como quiere el Apóstol,

«Es acción que el Papa alaba por haber sido "ejecutada con tanta generosidad", sin otra presión que la de su propia conciencia, con la espontaneidad con que las almas grandes se ofrecen a los grandes sacrificios. Con plena voluntad lo ha querido porque así se lo ha hecho querer "la esperanza de cooperar al bien de las almas o aun sólo para quitar pretexto de mayores males"; dejándolo todo, Sede, patria, obvenientes, aletos tarisimos.

«Acción "animada de tan puras y sobrenaturales intenciones", que en ella no aparece la mas leve escoria de humano afecto; que es la confluencia de un pensamiento todo informado de las altas conveniencias del bien de la Iglesia y de una voluntad que no quiere ni una más que el bien de sus ovejas y el de la Iglesia en su patria, de la que se le alejó.

«Carta de Buen Pastor la del Papa, que sabe el bien que a la Iglesia había hecho el Pastor que hasta ahora ha sido de la de Toledo, y por la que le exprese la "complacencia por todo el bien que ha hecho en beneficio de la Iglesia; impregnada de caridad, porque sabe el Papa "que no se deja sin dolor lo que con amor se posee", y el buen pastor ama a sus ovejas. Por esto Su Santidad quiere que le llegue al Exmo. Sr. Cardenal Segura "una palabra de paternal aliento en su dolor al separarse de sus queridos Hijos del Clero y del Laicado, con quienes le unen tantos y tan suaves vínculos de Pastoral afecto". Como bálsamo caerían estas suaves palabras del Pastor Supremo de la Iglesia sobre el corazón dolorido de quien se arranca, aunque voluntariamente, dolorosamente de su amado rebaño, que es, según el Apóstol, "el gozo y la corona" de un buen Pastor.

«Expresamos por estas líneas Nuestra pena por la separación de tan venerable Hermano, le ofrecemos el testimonio de Nuestra admiración respetuosa y pedimos a Dios, y rogamos encarecidamente a Nuestros diocesanos hagan lo mismo, que "le conserve y le dé larga vida y le haga feliz en la tierra y no le entregue en manos de sus enemigos", como pide la Iglesia para sus Obispos, para que, dondequiera que se halle, siga haciendo bien a la Santa Iglesia desde la dignidad altísima que en ella ocupa. (s.f.), "Renuncia del Eminentísimo Cardenal Segura.- Una carta del Papa". BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de noviembre de 1931, núm. 695, págs. 836-842. El boletín indicaba que la carta estaba tomada de "L'Osservatore Romano" del 24 de octubre).

Al efectuar la publicación de la carta de Pío XI al cardenal SEGURA, el boletín eclesiástico de Tarragona incluiría una "nota". fechada el 3 de diciembre y firmada por el cardenal VIDAL. con el siguiente escueto texto: ⁽³²⁹⁾

"Nos adherimos reverente y afectuosamente a los augustos sentimientos de cristiano aprecio y altísima consideración, que se expresan en el precedente documento pontificio, que tanto honra y ensaltece a un príncipe de la Iglesia." ⁽³³⁰⁾

Siguiendo la línea marcada para la provincia eclesiástica, el obispo de Barcelona, Dr. Manuel IRURITA ALMANDOZ, añadía a la publicación de la carta que efectuaba el boletín de su diócesis unas palabras haciendo suyos los sentimientos expresados por el papa al cardenal SEGURA, de quien, a diferencia del planteamiento efectuado por VIDAL, pasaba a hacer un encendido elogio:

"Con la debida reverencia hacemos nuestros los augustos sentimientos de singular afecto y encarecido elogio, que Su Santidad expresa en la Carta precedente.

(329) La publicación de la carta por los boletines eclesiásticos de la provincia eclesiástica de Tarragona, contrariamente a la premura con que había sido reproducida por otros boletines diocesanos, respondía el acuerdo adoptado por la Conferencia episcopal celebrada el 30 de octubre, en la que, entre otros extremos, se determinó que si en "Acta Apostolicae Sedis" era publicada se reproduciría en los boletines oficiales de las diócesis "haciendo propios los sentimientos expresados por el Papa", la carta sería publicada por "Acta Apostolicae Sedis" en 9 de noviembre de 1931. *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 447-448.

(330) 3 de diciembre de 1931. "Carta laudatoria", BDE de Tarragona, año 67, 3 de diciembre de 1931, núm. 24, págs. 465-466. El texto de la carta fue reproducido por el boletín en italiano.

«La grandeza moral del insigne Cardenal Segura, asentada sobre sus sólidas virtudes sacerdotales, acrecentada por su ardiente celo, desarrollado particularmente en el gobierno de la Diócesis de Coria, abrelantada por su incansable y fecunda actividad en la dirección de la Acción Católica desde la Sede Toledana, aparece ahora sublimada por la gloria de la persecución y del destierro, y coronada por la diadema del sacrificio hecho voluntariamente en aras de la mayor gloria de Dios y bien espiritual de la patria. Sacrificio este tan grande y meritorio que el Soberano Pontífice no ha dudado en compararle por ello con San Gregorio Nacianzeno.

Siempre permanecerá viva entre nosotros la memoria del gran Cardenal, apóstol infatigable de las glorias de la Virgen María y de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús."***

Este mismo boletín publicaría, con fecha 31 de diciembre de 1931, un "Elogio del cardenal Segura hecho por Su Santidad el Papa Pío XI", indicando que, reproduciéndolas de "L'Osservatore Romano" del día 25, daba a conocer las palabras pronunciadas por el papa ante el Colegio cardenalicio con motivo de su relicitación navideña. En ellas el pontífice se había referido con amargas irasas a los últimos acontecimientos de España -esencialmente marcados por el reves que la Iglesia había sufrido en la aprobación de determinados artículos de la Constitución, según mas adelante veremos, pese al sacrificio ofrecido en la figura del primado de Toledo-, y proponía al cardenal -el

(331) s.t. "Carta de Su Santidad al Esmo. Cardenal Segura", BOE de Barcelona, año 74, 4 de diciembre de 1931, núm. 22, págs. 657-658. El boletín indicaba que el texto de la carta estaba tomado directamente de "Acta Apostolicæ Sedis".

primero en advertir, según el papa, los peligros y amenazas que para la Iglesia española se avecinaban— no sólo a la atención sino también a la admiración de todos los allí presentes, volviendo a parangonar su gesto con el en su día realizado por San Gregorio Nacianceno en pro de los intereses eclesiásticos:

"Finalmente, señalando —podríamos decir— y fijando como en terrible triángulo estas pruebas, vemos los acontecimientos de la vecina España; la pobre y querida España, que ha visto en estos últimos días rasgarse una a una muchas de las más bellas páginas de su historia de fe y de heroísmo, y, me atrevería a decir, de civilización y de reconocimiento en todo el mundo; España, que con verdadera desolación ha visto desconsagrarse la familia y la escuela. Tenemos entre nosotros un testigo ocular del primer embate de la terrible tempestad: el predilecto hijo Cardenal Segura. El Santo Padre se regocijaba en proponerlo, no solamente a la atención de los presentes, sino a su admiración; él fue el primero que vio desencadenarse el huracán; y como vio toda su gravedad, todas las amenazas, todos los peligros, renovó el gesto de San Gregorio Nacianceno: si esta tempestad se ha desencadenado por mí, echadme al mar. Pero no estaba en él el motivo, no estaba allí la causa.

«Sabe el Papa, saben todos, y todos han podido fácilmente comprobar, que no para sustraerse a motivos reales el Cardenal Segura había hecho el generoso acto de deponer libremente en las manos del Sumo Pontífice la renuncia a la Sede de Toledo. No era para eximirse de motivos reales, sino tan sólo para quitar el más mínimo y aún más mal compuesto y mal supuesto pretexto. Su Santidad se regocijaba en darle, en presencia del Sagrado Colegio, la bienvenida en la Casa del Padre Común, al Centro de la

fe y de la Iglesia Católica." (332)

9.8. Epílogo sobre Segura

Antes de referirse a las palabras pronunciadas por el papa ante el colegio cardenalicio, entre cuyos miembros se encontraba presente el propio SEGURA, y deducir de ellas la reconsideración por la Santa Sede de la actitud seguida con el cardenal español, a quien solicitamente pasaba ahora a acoger, describe Ramon GARRIGA, en su periodístico libro, las penurias que este sufrió durante su exilio en Francia desde que el Vaticano logró obtener su renuncia a la silla primada de Toledo hasta que, superada una larga recaída en la crónica dolencia hepática que padecía, fue autorizado a trasladarse a Roma, donde sería nombrado cardenal de la curia, fórmula que le permitiría no sólo cubrir sus necesidades materiales sino ocupar una posición en la Santa Sede que le posibilitaba "continuar haciendo sentir su voz y su voto en las cuestiones españolas" durante los seis largos

(332) [24 de diciembre de 1931]. "Elogio del cardenal Segura hecho por Su Santidad el Papa Pío XI", BOE de Barcelona, año 74, 31 de diciembre de 1931, núm. 24, pág. 694. Las frases del pontífice serían reproducidas por distintos boletines eclesiolásticos a lo largo del primer trimestre de 1932 (BOE de Valencia, Época II, 1 de febrero de 1932, núm. 2140, págs. 52-53; BOE de Málaga, año 65, febrero de 1932, núm. 2, págs. 45-46; ...). Según indican BATLLORI y ARBELDA el 11 de enero de 1932 el Dr. BORRAS preguntaría a VIDAL si estas frases debían publicarse también en el boletín diocesano, añadiendo que no se hizo "sens dubte perquè degué sembar a Vidal que ja bastava d'haver-hi reproduït la lletra del papa a Segura ilavors de la seva renúncia a la Seu de Toledo" (*Església y Estat durant la segona...*, II, pág. 370, nota b).

años de su permanencia en Roma.⁽³³³⁾ Para GARRIGA, el cambio

(333) No podemos medir la amplitud de alcance de esta afirmación. De la actividad de SEGURA en relación con España durante su estancia en Roma solo tenemos noticia de las siguientes opiniones y hechos, dados a conocer por la publicación del archivo de Vidal y Barraquer efectuada por Miguel BATLLORI y Víctor Manuel ARBELLOA:

* Al referirse a las correcciones al borrador del documento colectivo del episcopado de 20 de diciembre de 1931 efectuadas por la Secretaría de Estado del Vaticano, BATLLORI y ARBELLOA, en la introducción a la primera parte del volumen II del Arxius de Vidal y Barraquer, indican que desconocen quien fue o quienes fueron el corrector o los correctores, para añadir seguidamente que "Parece lógico suponer que, hallándose ya en Roma el cardenal Segura, también el fuese consultado" (*Esglesia i Estat durant la segona...*, II, Pág. 52).

Al transcribir la carta que el 19 de diciembre de 1931 envió VIDAL a TEDESCHINI, estos mismos autores comentan el párrafo en que le habla de los rumores sobre una exposición de los integristas a la Santa Sede ("Reservadamente he sabido que don Manuel Semante con otros elementos afines han preparado una exposición a la Santa Sede...") indicando que no les consta "de que sigui forga possible" - que este hecho tuviera relación con la reciente llegada del cardenal SEGURA a Roma, como cardenal de la Curia y añadiendo que, según noticia dada por "Il Messaggero", este se hospedaría durante el primer tiempo en casa de su amigo el conde RODRIGUEZ SAN PEDRO (Op. cit., II, pag. 282, nota 3).

También estos autores comentan como al estar diseñando la organización para el sostenimiento del culto y clero las observaciones que sobre esta cuestión se recibieron desde Roma hicieron sospechar al obispo de Urgel, Dr. BUIART, que en ellas había podido intervenir el cardenal SEGURA, como VIDAL manifestaba al nuncio en carta de 21 de enero de 1932 ("con la mayor reserva se indicaba el Hermano de Urgel que cabe sospechar influencias directas o indirectas del Emo. Cardenal Segura en el asunto, y crea que muy de veras lo sentiría") (Op. cit., II, págs. 339 y 370).

Entre los temas a tratar por VIDAL con el Secretario de Estado vaticano con motivo de la visita "ad limina" que el cardenal realizó en compañía del de Sevilla a primeros de julio de 1932, figuraba el siguiente: "Asunto Conde Rodríguez de San Pedro, que comprometía al Cardenal Segura y tocó la división entre los católicos". Tal "asunto" no era otro que una campaña contra el nuncio fundada, al parecer, en las críticas que los católicos extremistas hacían de su actitud conciliadora con la República y otras acusaciones de carácter personal, campaña que, instrumentalizada esencialmente por "El Siglo Futuro", venía a contraponer la figura y actuación del cardenal SEGURA a la de TEDESCHINI y que, al estar protagonizada por los amigos de aquél, podía hacer sospechar que se efectuaba bajo sus indicaciones o, al menos, con su aquiescencia, siendo como era conocida la rivalidad entre ambos purpurados. (Op. cit., II, pag. 662, nota 2; III, págs. 22 y 106 y IV, págs. 153-156. Sobre la enemistad entre Segura y el nuncio ver también PRIETO, Indalecio, *Convulsiones en España*, México, 1967, págs. 280-281).

de la actitud vaticana ante SEGURA, representado por tal

Que la opinión reinante era favorable a creer cualquier intrusión y deligerancia de SEGURA lo denuncia el contenido de la carta que el 22 de septiembre de 1932 escribió el Dr. GUITART, obispo de Urgel y príncipe cooberano de Andorra, al nuncio para hablarle de "ciertos infundios recogidos por la prensa sectaria, cuya única finalidad es comprometer a la Altra de Urgel y al Principado de Andorra, en frente de la República Española". Tales infundios, recogidos por los periódicos "Luz; Diario de la República" de 8 y 16 de septiembre, "El Liberal", del 9 del mismo mes y "La Humanitat", del día 10, indicaban que el Dr. GUITART había dado acogida en Andorra a MARTINEZ ANIDO y al cardenal SEGURA, que habían permanecido ocultos en una masía hasta conocer el resultado del alzamiento del general SANJURJO del 10 de agosto. La finalidad de esta carta no era otra que negar rotundamente los hechos y defenderse de los manejos que tal prensa le atribuía (Op. cit., III, págs. 193-203).

En carta del cardenal VIDAL al Secretario de Estado vaticano de 10 de diciembre de 1932, a la que acompañaba la tradicional felicitación navideña para el papa, indicaba VIDAL que exponía a Pío XI las dificultades que planteaba a la Iglesia española la actuación de los integristas, tesis del que hablaba a PACELLI más explícitamente dándole cuenta de la campaña que realizaban contra los periódicos católicos y en la que eran aconsejados por "algunos religiosos y sacerdotes que se atribuyen tener instrucciones reservadas de la Santa Sede, cuyo criterio dicen conocer bien por personas residentes en Roma que constantemente la informan", frase que, como indican BATLLORI y ARBELDA, encierra una clara alusión al cardenal SEGURA. Como dichos autores señalan las disidencias producidas por estas campañas entre los diferentes grupos de católicos no dejaría de ser aprovechada por la prensa de izquierdas que daría diversas noticias sobre probables escritos del cardenal SEGURA (Op. cit., III, págs. 447, nota 16 y 459).

Al escribir el cardenal VIDAL a TEDESCHINI en 14 de marzo de 1933 para hablarle de la organización de las peregrinaciones a Roma con motivo del Año Santo le exponía sin eslabos los problemas de índole política que podían surgir: "¿Y si en la peregrinación general, durante el camino o en Roma se nos presenta algún miembro de la familia real española o alguna otra persona de relieve político que quiera aprovechar la oportunidad referida para sus fines? ¿Y si al llegar a Roma se une a la peregrinación algún otro personaje, aludido por el Conde de Rodríguez San Pedro, y dirige la palabra a los peregrinos, y les da normas y directrices?"; referencia a "algún otro personaje" que, como indican BATLLORI y ARBELDA, es una alusión al cardenal SEGURA (Op. cit., III, pág. 698).

Con fecha 15 de abril de 1933 volvía a escribir el cardenal VIDAL al nuncio para darle cuenta de la carta enviada por SEGURA a la priora, y por su mediación, a todas las casas de la Comunidad de Nuestra Señora y Enseñanza, con motivo de haber sido nombrado cardenal protector de dicha orden. El arzobispo de Tarragona consideraba que era muy delicado lo que SEGURA preguntaba y los datos que pedía sobre el estado económico de las diferentes comunidades religiosas, por lo que pedía instrucciones sobre la forma de actuar al dudar "que la Santa Sede haya amonorado la jurisdicción que los

nombramiento y por el elogio realizado por Pío XI en la

Ordinarios tienen actualmente en las Comunidades conventuales". A esta carta contestaría TEDESCHINI el 12 de mayo habiéndole de la, a su juicio, extralimitada actuación de SEGURA en los cargos que le habían sido concedidos en relación a determinadas órdenes o congregaciones religiosas e indicándole que los ordinarios tenían la obligación de defender su jurisdicción canónica no tolerando que frente a ella se levantara otra; a ello añadía el nuncio una expresiva frase referente a la forma de actuar de SEGURA y recordando su estilo durante los primeros meses de la República: "¿Y que decir de la reincidencia en los mismos métodos que nos han llevado a las dificultades consabidas y que después toca a nosotros resolver y remediar con tantísimas penas?" (Op. cit., III, page. 725 y 735).

El 27 de julio de 1933 VIDAL finalizaba una nueva carta al nuncio diciendo "Me llaman la atención sobre una carta del señor cardenal Segura que inserta 'El Siglo Futuro'. Si no tenemos prudencia sobrevendrá la división, que es a lo que se tiende". Para paliar en lo posible la actuación de la prensa integrista, cuyo paladín era el periódico citado bajo la dirección de Manuel SEVANTE (ver un ejemplo de las relaciones de este con el cardenal SEGURA en la nota 312), el cardenal VIDAL redactaría un informe detallando los ejemplos que tendían a sembrar la desunión "para favorecer a ciertas tendencias y a determinados periódicos que... con frecuencia actúan, directa o indirectamente, contra las directivas de la Jerarquía, especialmente en lo que hace referencia a la manera de comportarse con los otros periódicos y periodistas católicos que no militan en partidos políticos", ante lo que era preciso y urgente "un remedio eficaz". Uno de los ejemplos era, precisamente, la aludida carta de SEGURA publicada el 11 de julio de 1933 en "El Siglo Futuro" y reproducida por "El Correo Catalán" el día 13 con un artículo de Fr. Francisco IGLESIAS, O.F.M., sobre lo que el arzobispo de Tarragona comentaría: "Siempre los frailes, como si no tuviesen hoy un poderoso enemigo exterior, procurando, como 'in illo tempore', ocuparse de asuntos que no conduyan a la unión de los católicos"-, publicación que, dadas las expresiones de SEGURA, representaba para VIDAL un peligro ya que, según decía, al tratarse de un cardenal de la curia "la gente sencilla considera que, estando cerca de la Santa Sede, expresa el modo de sentir y pensar de Esta respecto a un periódico bien conocido por su actuación". Al informe sobre la prensa integrista -de cuya actuación también daría cuenta al Secretario de Estado vaticano- uniría VIDAL como anexo la susodicha carta altamente elogiosa de la labor desarrollada por el periódico al que apoyaba decididamente (ver el apéndice num. 33) (Op. cit., III, page. 817; 867-869; 934-938 y 958-959).

De las visitas que por parte de españoles recibía SEGURA en el exilio da buena cuenta la narración del viaje que, con motivo de la peregrinación del Año Santo a Roma, hizo el cardenal VIDAL, y que su acompañante, el Dr. VILADRICH describiría por carta al Dr. BORRAS; al referirse a las visitas efectuadas a los cardenales alude a la realizada a SEGURA con estas palabras: "está bien y tenía las salas llenas de gente que decía: 'Aquí se siente gran ambiente español'" (Op. cit., III, page. 1019-1020, nota 1).

Para acabar con estos ejemplos de la actuación del cardenal SEGURA indicaremos, por último, que al referirse al empeño del cardenal VIDAL en evitar que, nombrado nuevo arzobispo de Toledo el Dr. Isidro GOMA, se

audiencia al colegio cardenalicio de 24 de diciembre de 1931, venía directamente motivado por la aprobación en las Cortes del artículo 26 de la constitución y la expulsión de la Compañía de Jesús, por lo que la Santa Sede, ante tal fracaso, pasaba a rectificar rápidamente la línea seguida con el cardenal.⁽³³⁴⁾

produjera nuevamente una excesiva centralización de la Iglesia española en dicha sede, BATLLORI y ARBELGA, en la introducción a la cuarta parte del volumen III del "Arxiu Vidal i Barraquer", comentan lo siguiente: "En agosto de 1933, probablemente Vidal y Barraquer no sabía que Segura insistía mucho en que jamás no cediese ni poco ni mucho en cualquier cosa que pudiese menegar las preeminencias primaciales de Toledo" (Op. cit., III, pág. 830). Ver sobre la cuestión de la primacía lo indicado en la nota 107.

- (334) GARRIGA, Ramón, *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977, págs. 179-187. Aunque en la nota 64 ya hemos dado nuestro parecer sobre esta obra es, que sepamos, la biografía más completa sobre el cardenal SEGURA. En relación con lo expuesto en el texto hemos de indicar que, según GARRIGA, para el Vaticano SEGURA "se había convertido en una pieza que convenía tener a mano para el nuevo juego que había empezado" y "era menester recurrir nuevamente a la figura de quien había ocupado la silla primada de España para recuperar el terreno que se había perdido". El interés mostrado tanto por el papa como por el cardenal PACELLI por la salud del cardenal durante su largo periodo de enfermedad en Francia, del que el autor citado también da cuenta, y el hecho de que fuera a Roma en cuanto estuvo restablecido, permiten, sin embargo, plantear la duda contra esta versión, de si la decisión de la Santa Sede no había sido adoptada con anterioridad y fue el estado de SEGURA el que impidió hacerla efectiva con mayor premura, máxime cuando de la carta que VIDAL le escribiera el 11 de noviembre de 1931, se desprende claramente que SEGURA tenía previsto ir a Roma ya en el mes de octubre, atribuyendo su retraso, en la contestación que dió al de Tarragona el 29 del mismo mes, precisamente a la enfermedad sufrida, como más abajo en el texto diremos, enfermedad que incluso le obligó a permanecer en Vichy antes de emprender el viaje al Vaticano ya que, como decía "il Messagero" de Roma "... non possa dirsi che sia completamente ristabilito" (*Església i Estat durant la segona...*, II, págs. 282, nota 3). El enfoque dado por GARRIGA sólo pretende exponer la rectificación de la actuación de la Santa Sede, hasta el punto de llegar a titular el epígrafe en que da cuenta de la acogida recibida por el cardenal con la significativa expresión "El triunfo de Segura" sin plantear qué otro camino que acoger al dimitido cardenal podía seguir Roma y sin aludir siquiera a la carta enviada por el papa a SEGURA con fecha 1 de octubre, carta que, debidamente difundida por los órganos de expresión de la Iglesia, como hemos visto, era una primicia del "elogio" que desowes haría verbalmente y que había sido escrita antes de la votación del famoso artículo de la Constitución. En la línea expuesta por GARRIGA sólo consta como hipótesis carente de rigor el telegrama inserto en el "Noticiero Universal" del 20 de noviembre de 1933,

Respecto a lo que a la jerarquía española se refiere, y salvando las encendidas frases que, como hemos visto, le dedicara el Dr. GOMA y las no menos expresivas del Dr. IRURITA, cabe decir que poca atención pública se prestó a la renuncia del primado, motivada, como venía, por acuerdo de la Santa Sede y dada la conveniencia de no remover un hecho que se producía precisamente para que la potestad civil y la eclesiástica pudieran hallar vías de solución a sus relaciones. (225)

Antes de que la dimisión de SEGURA tuviera lugar, y a semejanza del ofrecimiento que le había hecho anteriormente el clero de Toledo, la Junta Central de Acción Católica, de la que el cardenal era delegado pontificio, había acordado, en el mes de septiembre, invitar a todas las Juntas diocesanas, entidades y particulares a que ofrecieran su ayuda para sustituir las temporalidades suspendidas al primado y al obispo de Vitoria; el boletín eclesiástico de la diócesis de Palencia, único entre los consultados en que hemos encontrado publicado este acuerdo, señalaba que "este llamamiento ha sido atendido con gran interés y filial cari-

telegrama que, publicado por otros muchos periódicos a raíz de las elecciones, fue considerado por el cardenal VIDAL como "tendencioso" y producto de los extremistas de derechas, interesados en desviar la opinión de los "buenos católicos"; en dicho telegrama se indicaba que después de conocer los primeros resultados de las elecciones, el papa había recibido a SEGURA "a pesar de estar suspendidas las audiencias durante los ejercicios espirituales" (*Església i Estat durant la segona...*, IV, págs. 166 y 171).

- (335) Entre los boletines eclesiásticos consultados y con independencia de los pronunciamientos personales de los dos obispos indicados, tan sólo el de Málaga sembró la personalidad del cardenal SEGURA por medio de la reproducción literal de un artículo publicado por "El Debate" en que se destacaba que "es el Cardenal quien dimite; que dimite ante Roma; que es Roma quien acepta la renuncia", se aludía a la campaña periodística contra él y se destacaba la magnanimidad de la Santa Sede ("Un Prelado Modelo", BDE de Málaga, año 64, 15 de octubre de 1931, núm. 11, págs. 405-407).

ño",⁽³³⁶⁾ más no podemos constatar el alcance de esta afirmación ni si las contribuciones así allegadas sirvieron para mitigar las penurias económicas que, según cuenta Ramón GARRIGA, pasó el prelado en Francia.

Salvo este publico gesto y los comentarios de los dos obispos mencionados, los restantes pronunciamientos de la Iglesia oficial fueron privados y escasos. Así, en las conferencias episcopales de las distintas provincias eclesiásticas, celebrados para la preparación de la de metropolitanos de 18-20 de noviembre de 1931, tan sólo la de Toledo, muy contundentemente⁽³³⁷⁾ y, en forma global la de Jaén,⁽³³⁸⁾ hicieron mención de la situación de SEGURA, lo cual dió lugar a que en el acta de la mencionada conferencia de metropolitanos se recogiera lo siguiente:

"Una vez consignadas las anteriores deliberaciones y acuerdos recaídos, la Conferencia consideró propio y oportuno finalizar el acta oficial de la misma con la expresión de su pesar y condolencia por haber dejado de contar en su seno al Emmo. Sr. Cardenal Segura, que tantas veces la había dignamente presidido, y hacer propios los elogios y sentimientos del Papa en la Carta de aceptación de su renuncia al Arzobispo (sic.) de Toledo, la cual, una vez publicada en Acta Apostolicae Sedis,

(336) s.f. "Crónica General. Por los Prelados desterrados", BGE de Palencia, año 81, 1 de octubre de 1931, núm. 21, pag. 660.

(337) "Se acordó, asimismo, consignar la pena que sienten al no verse presididos por el Emmo. Sr. Cardenal Segura, víctima de una campaña de difamación sistemática, que no ha logrado manchar su fama inmaculada, ni aminorar sus prestigios, tan sólidamente asentados, y que conste en acta la más viva protesta contra todos los desamores de que ha sido objeto, así como los cariños, respetos y adhesión de los Prelados de la Provincia Eclesiástica, a quien supo ser tan fiel intérprete de las decisiones pontificias y presidirlas tan acertadamente."

(338) "Añadir a la protesta de los puntos 62 y 79, o consignar en documento aparte, protesta que sea homenaje y consuelo a los Obispos desterrados o que no pueden residir en su Diócesis por falta de garantías oficiales, lamentando esta situación, y condenando, o al menos reprobando, las causas que lo motivan".

será insertada en los Boletines Oficiales Diocesanos." (339)

Con independencia de estos pronunciamientos colectivos en el ámbito privado de la jerarquía sólo nos consta la sugerencia efectuada el 21 de diciembre de 1931 por el arzobispo de Valencia, Dr. Prudencio MELO ALCALDE, que al enviar a VIDAL su parecer y correcciones al borrador de la que sería la declaración colectiva del episcopado de 20 de diciembre de 1931, indicaba que "tal vez no hubiera sobrado consignar una alusión a la pena que sentimos por nuestros Hermanos ausentes", alusión que, decía, habría de ser, en su caso, muy breve, en un documento de carácter doctrinal como era el que se elaboraba; para el Dr. MELO hacer tal cosa sería rendir "un tributo a la justicia y al afecto de Hermanos, y serviría de edificación a los fieles"; la sugerencia, no obstante no fue tomada en cuenta quizá porque el arzobispo de Tarragona prefiriera mantener en el ámbito de lo privado tales expresiones de condolencia. (340)

El mismo así lo había efectuado (y probablemente tal haría el resto del episcopado) por carta de 10 de noviembre, en la que manifestaba a SEGURA que ya en octubre le habían anunciado su pronto viaje a Roma, por lo que había esperado a conocer su llegada para escribirle allí, al ver, no obstante, que el viaje se retrasaba, no quería dejar pasar más tiempo para expresarle -en frases que si llenas de caridad no coinciden precisamente con la opinión que hemos visto que tenía el arzobispo de Tarragona del cardenal SEGURA- su "condolencia por vernos privados de sus luces, de

(339) *Església i Estat durant la segona...*, II, págs. 119, 132 y 138. En lo que a la publicación de la carta del papa se refiere, ya hemos visto como muchos boletines eclesásticos se adelantaron a efectuarla previamente a este acuerdo.

(340) *Op. cit.*, II, págs. 288-289.

su celo y de su infatigable labor, que tantos servicios han prestado a la Iglesia, la cual ha sabido apreciar, con frases muy laudatorias, el acto de patriotismo y de generosidad realizado por Vuestra Eminencia", a ello añadía que se unía a los sentimientos expresados por el papa y le confirmaba la veneración y afecto que sentía por él, para concluir informándole de la celebración de la próxima conferencia de metropolitanos por si quería hacerle alguna indicación sobre temas a tratar en la misma. Indicación que, para VIDAL, tenía unos concretos límites como claramente expresaba al decir a continuación "pues yo ignoro el estado de muchas cosas relacionadas con la Acción Católica y con la Prensa y con los fondos de que se nutrían ambas". La contestación de SEGURA a esta carta con otra de similar extensión fechada el 29 de noviembre, deja revelar si no el contrario efecto que le pudieran haber producido las palabras de VIDAL -lo cual puede ser una hipótesis excesiva- si la amarga tristeza que le embargaba: comenzaba aludiendo a la enfermedad padecida durante mes y medio, de la que -decía- apenas comenzaba a convalecer, siendo esta la razón que le había hecho suspender su correspondencia y, de ahí, el que también hubiera sufrido retraso su respuesta a "la bondadosa y estimada carta" sobre la que le expresaba su gratitud; en contestación a la propuesta del de Tarragona SEGURA se limitaba a decir: "Ausente de España ya siete meses en tan extraordinarias circunstancias, no estoy en condiciones de hacer indicación ninguna que pueda ser útil en estos momentos difíciles", añadiendo escuetamente que todos los años se había enviado a los prelados cuenta detallada de la Acción Católica y en ella se consignaban los fondos con que contaba.⁽³⁴¹⁾

Ya en el mes de abril de 1932 el boletín de la diócesis de León daría la noticia de que el papa, "dando una prueba del gran concepto que le merece y del mucho aprecio que

(341) Op. cit., II, págs. 107-108 y 194

tiene al que fue Primado de España", le había nombrado miembro de la Sagrada Congregación de Ritos;⁽³⁴²⁾ en igual fecha el boletín eclesiástico de Toledo publicaría la reseña del libro que sobre el cardenal había escrito Jesús REQUEJO SAN ROMÁN prologado por Ramiro DE MAEZTU que, según el comentarista, había tenido gran difusión y en el que se contrarrestaba la campaña de calumnias hecha por parte de la prensa y que había culminado con su expulsión; el autor de esta reseña aprovecharía la ocasión para hacer un cálido elogio de la actuación de SEGURA durante su permanencia en la sede primada y de su "silencio heroico".⁽³⁴³⁾

Por la carta enviada a SEGURA por el cardenal VIDAL el 5 de agosto de 1932, en la que le expresaba su disgusto por no haberle visto en Roma en el viaje que había efectuado con el arzobispo de Sevilla con motivo de la visita "ad limina", ya que había marchado a Vichy, sabemos que aquel le mantenía informado de los acuerdos adoptados por las conferencias de metropolitanos. A dicha carta contestaría SEGURA el 21 de octubre agradeciendo el recuerdo de los arzobispos y señalando que rogaba para que "en momentos tan difíciles puedan tutelar tantos y tan sagrados intereses como les están confiados, y que se ven amenazados por la persecución de que está siendo objeto la Iglesia española por parte de sus enemigos." Esta carta, que hacía referencia a las frases alusivas al cardenal SEGURA con que los metropolitanos habían finalizado el acta de la conferencia de 18-20 de noviembre de 1931, sería leída por el cardenal VIDAL en la celebrada por estos del 3 al 6 de noviembre de 1932, como figura en su correspondiente acta. Con

(342) s.f. "Distinción al Emmo. Cardenal Segura", BOE de León, 16 de abril de 1932, núm. 7, pág. 175.

(343) s.f. "El cardenal Segura", BOE de Toledo, año 88, 16 de abril de 1932, núm. 8, págs. 128-129. A la difusión de esta obra por los boletines eclesiásticos va nos hemos referido en la nota 66 de este capítulo.

independencia de estas cartas no consta otra relacion escrita entre los dos cardenales durante el periodo examinado que unas escuetas frases cruzadas como felicitacion de la Navidad de 1932.'''

Hemos de indicar, por ultimo, que en el mes de octubre de 1932 el boletin eclesiastico de la diocesis de Palencia daria cuenta de "la cariñosa deferencia" que el cardenal habia recibido del papa, que lo habia nombrado "protector de la Compania de Hermanos de la Santa Cruz de Sevilla", y se congratulaba de que siguiera siendo objeto de distinciones por la Santa Sede "por lo que puede servir de consuelo al corazon del bondadoso purpurado".''' Ya en 1933 este mismo boletin publicaria la noticia de que el papa habia hecho objeto de una nueva distincion a SEGURA, la cual tenia "hondo significado para uno de los institutos religiosos mas amados de España", toda vez que habia sido nombrado "protector de las Hermanitas de los Pobres", de las que existia en Palencia "uno de los primeros noviciados"; por ello felicitaba al cardenal y a las religiosas "por lo que el Instituto tiene de espanol y de palentino".'''

Como desenlace de toda la cuestion suscitada por el cardenal SEGURA en el primer bienio de la segunda Republica, Pio XI nombraria el 12 de abril de 1933 al Dr. Isidro GOMA y TOMAS, de ideas afines al cardenal y no seguidor, por tanto, del conciliador espiritu del arzobispo de Tarragona -a cuya diócesis habia pertenecido- arzobispo de Toledo.

(344) *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, págs. 100-101, nota 20; 117, nota 104; 174; 256-257; 318 y 506.

(345) s.f., "Crónica General. El Pontifice sigue distinguiendo al Cardenal Segura", BOE de Palencia, año 82, 31 de octubre de 1932, núm. 21, pag. 610.

(346) s.f., "Crónica General. El Cardenal Segura", BOE de Palencia, año 83, 1 de agosto de 1933, núm. 15, pag. 434. Sobre este nombramiento y al que hace referencia la nota anterior ver lo indicado en la nota 333 sobre la carta de VIDAL al nuncio de 15 de abril de 1933.

Este nombramiento hace suscitarse a Ramírez Jiménez la hipótesis o "sugestiva interrogante", como dice, sobre la postura de la Santa Sede respecto a SEGURA "a quien en principio se pensó iba a defender a ultranza dejando vacante el arzobispado toledano", hipótesis, como vemos, contraria al planteamiento dado por Garriga que hemos dejado apuntado.¹⁴⁷⁷

(347) RAMÍREZ JIMÉNEZ, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969, pág. 205. Sobre lo indicado por GARRIGA ver lo señalado en la nota 334. Distinta a la sugerencia de RAMÍREZ JIMÉNEZ era, sin embargo, la hipótesis que ya en el mes de agosto había planteado el rotativo "Diario de Tarragona" y que vendría recogida íntegra como editorial de "El Sol". Según este comentario, exiliado el cardenal SEGURA, "como sospechoso de monarquismo" y dada la decisión del gobierno "de no permitirle la vuelta a España si no es la Monarquía quien lo trae", habida cuenta que la sede de Toledo no podía permanecer sin cubrir indefinidamente, "El Pontífice desea que la vacante sea cubierta y que lo sea por persona por lo menos agradable al Gobierno, sino depositaria de su confianza. Y el mismo Pontífice no ignora que el único prelado español que se encuentra en estas condiciones es el cardenal VIDAL Y BARRAQUEEN, quien, al conocer el pensamiento del Papa, se sintió altamente honrado por lo que el hecho tiene de significación moral y personal."

Las razones en que la prensa citada se basaba para hacer sus conjeturas eran dos, un viaje que el cardenal VIDAL había hecho a Roma por aquellas fechas (ver *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 194-196) y el hecho que, según interpretaba, el arzobispo de Tarragona recibía ahora documentos que normalmente eran enviados al privado, razón que también se esgrimía para volver a tratar de la cuestión de la primacía entre una y otra sede.

Cuan lejos estaban ambas conjeturas de la realidad lo demuestra el nombramiento recaído en el Dr. GOMA y aun el hecho de que, durante su estancia en Roma, el cardenal VIDAL, por carta de 9 de agosto enviada al nuncio, tratara del rumor que circulaba en Madrid de la pretensión del obispo de esta diócesis de constituir la capital de la nación, y precisamente en razón de esta capitalidad, en sede arzobispal, pretensiones que, indicaba el cardenal, "pueden sonar a ambición, hacen mal efecto a los católicos y a todos", y que, reconociendo la falta de coincidencia entre el centro neurálgico intelectual y económico y el eclesiástico, podía solucionarse con sus proyectos de actuación colegiada. (ibidem)

Nada más distanciado, pues, de los hechos que los comentarios periodísticos, no sólo sobre la hipótesis del nombramiento del arzobispo de Tarragona, sino incluso de la del deseo pontificio de que el privado fuera, cuando menos, grato al gobierno. La figura del Dr. GOMA más parecía responder a los anhelos de los sectores más intransigentes - a los cuales también la prensa se había referido -, por lo tanto, al interés en continuar con una figura afín al estilo del

10. Las restantes actuaciones del episcopado durante la andadura inicial de la República.

El propósito que nos ha guiado en el análisis de los relevantes hechos hasta aquí descritos, no ha sido otro que el de dar una visión general de la actitud de la jerarquía católica en los meses iniciales de la República. Como hemos tenido ocasión de exponer, este período sufrió singularmente la impronta de la postura del primado de Toledo ante el nuevo régimen y las disparidades consiguientes que, por su causa, se dieron entre la Iglesia y el gobierno provisional. Solventado el "asunto SEGURA" como medio de obtener garantías ante el tratamiento de la cuestión religiosa en la nueva constitución, la jerarquía española tendría que hacer

anterior arzobispo de Toledo,

Esta hipótesis viene apoyada por la iniciativa de SEGURA, residente en la playa francesa vasca de Anglet, de una entrevista con el nuevo primado GOMA, la cual se celebraría en esta localidad el 23 de julio; entrevista en la que, según se supo años más tarde, se puso de manifiesto la aversión de ambos hacia el nuncio y hacia Ángel HERRERA y a partir de la cual se originó una correspondencia entre ambos durante todo 1934. (TURÓN DE LARA, Manuel *La España del siglo XX*, tomo II, *De la República a la guerra civil, 1931-1936*, Barcelona, 1974, pag. 427. y GARRIGA, Ramón, *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977, págs. 115-116.) De todas formas, y siguiendo la lógica postura de RAMÍREZ JIMÉNEZ, expresada en la obra y página antes aludida, no poseemos datos suficientes para ahondar en estos hechos que, por otra parte, exceden del planteamiento de esta tesis. Sobre el temario de prensa citado ver el apéndice núm. 34.

inmediatamente frente a la realidad de los debates parlamentarios, a la del texto resultante de los mismos y a la de toda la legislación secularizadora que, en su desarrollo, dictaría la República.

Si bien los pronunciamientos de la jerarquía ante tal legislación son, como queda dicho, el objeto fundamental de nuestra tesis, creemos que el análisis tangencial de otras cuestiones que nos informan de la actitud del episcopado en los meses precedentes al debate de la constitución y en los momentos inmediatos a su aprobación pueden arrojar más luz sobre la postura de la jerarquía católica de la época y su consiguiente reacción ante la labor secularizadora del nuevo régimen.

De esta forma, así como hasta aquí, aparte de tratar del caso del primado, hemos intentado dar cuenta de la postura de los prelados ante los hechos más relevantes del período examinado -quema de iglesias y conventos, decreto sobre libertad de creencias y cultos, etc. etc.- queremos ahora asomarnos a otras cuestiones entretajidas con la vida republicana en los albores de la Constitución de 1931 y en las fechas de la elaboración del pensamiento de la jerarquía sobre la misma, bien entendido que nuestra pretensión -centrada en el pensamiento de los miembros del episcopado- se ciñe únicamente al análisis de tal postura y no, desde luego, al de las cuestiones que la motivaban, las cuales requerirían un estudio monográfico en profundidad, alejado del propósito de esta investigación.

10. 1. El tratamiento de la cuestión social en 1931:
prelados de Barcelona, Valladolid, Ávila, Segovia,
Madrid-Alcalá, Coria, Vitoria, Toledo y Oviedo.***

Ya el boletín eclesiástico de Toledo de 16 de abril contenía, aparte de las circulares de SEGURA sobre rogativas por las necesidades de la Iglesia y de la Patria y sobre el día de la prensa católica ya tratadas,*** un tercer documento firmado por el primado el mismo día 14 relativo al "cuidado espiritual de los emigrantes". Se refería en él a su interés anual por esta cuestión, aunque no dejaba de aludir a "las circunstancias especiales" en que en esta ocasión redactaba su escrito, lo que hacía que fuera "más breve que de costumbre". A ello añadía unas frases que eran, una vez más, expresivas de su disgusto por la instauración del nuevo régimen -"Más precisamente en los acontecimientos prosperos y adversos de familia, es cuando con más necesidad

(348) Sobre la cuestión social en España ver TUSELL GÓMEZ, Javier, *Historia de la democracia cristiana en España*, Madrid, 1974; BENAVIDES, D., *El fracaso social del catolicismo español*, Ardoleya Martínez, Barcelona, 1973; CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Estudios sobre la Iglesia española del III*, Madrid, 1973, págs. 238-283; RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969, págs. 69-132 y 316-318; RAMOS OLIVEIRA, Antonio, *Historia de España*, III, México, 1962, págs. 120-123; MARTÍ, Casimiro et al., *España*, en AA.VV., *Historia del movimiento obrero cristiano*, págs. 263 y ss; SECO SERRANO, Carlos, *¿Era católica España en 1930?* en AA.VV., *Iglesia, Estado y Sociedad en España, 1930-1982*, Barcelona, 1984, págs. 29-30; ALZAGA VILLAMIL, Oscar, *La primera democracia cristiana en España*, Barcelona, 1973, págs. 59-89; *Església i Estat durant la segona República espanyola*, Arxiu Vidal i Barraquer, al cuidado de BATLLORI, M. y ARBELLOA, V.M., II, Barcelona, 1975, págs. 536-541 y BRENNAN, G., *El laberinto Español*, París, 1962, págs. 171-172. En el prólogo a esta obra da el autor una explicación opuesta a la que inmediatamente veremos del cardenal SEGURA y quizá también excesivamente simple al no calibrar el aspecto económico como una de las causas de la afiliación de la clase obrera española a movimientos sindicales opuestos a la ideología católica. Op. cit. pag. XII.

(349) Ver la nota 3 de este capítulo.

se reproduce el recuerdo y se reaviva el afecto de los hermanos ausentes del hogar"- frases que aclaraba suficientemente al explicar seguidamente cómo ese año había podido notar "cuán sensiblemente repercuten en nuestros emigrados los acontecimientos que entre nosotros se desarrollan, con la particularidad de que los agrava la misma distancia". Si bien consideraba estas causas como "transitorias y accidentales" frente a las que juzgaba permanentes como eran el aumento de la emigración "y las propagandas disolventes entre los emigrados", lo que hacía que fuera en los grandes centros industriales donde acechaba el mayor peligro de las almas, que el cardenal resumía en unas frases que, en definitiva, pretendían ampararse en el común denominador de la primacía del orden social para negar toda libertad de pensamiento al individuo.

"Allí es donde se desarrolla una propaganda hablada y escrita que causa verdadero pavor. Allí donde todo concita al mal y donde hay menos defensas para la virtud es donde se incuban esos gérmenes de irreligión que llevan consigo gravísimos riesgos aún para el mismo orden social."

Concluía el prelado su documento exhortando a los fieles para que ayudaran a la obra de misiones y mantenimiento de sacerdotes entre los emigrantes.⁽³⁵⁰⁾

Esta "Breve carta sobre el cuidado espiritual de los emigrantes" -cuestión de la que el primado trataba cada año- venía a inscribirse en la línea del pensamiento social del cardenal, del que había sido paradigmática su pastoral de octubre de 1930 por la que creó una "Bolsa Española de trabajo" para obreros y patronos católicos, pastoral que, dado el contexto temporal al que se cife nuestra investigación, hemos visto curiosa y tardíamente reproducida por los boletines eclesiásticos de otras diócesis ya bien

(350) 14 de abril de 1931, "Breve carta sobre el cuidado espiritual de los emigrantes", BOE de Toledo, año 87, 16 de abril de 1931, núm. 4, págs. 133-136.

entrado el periodo republicano. Concretamente en el de Palencia, que la publicaría el 1 de junio de 1931, cuando la situación quizá no era demasiado propicia para este tipo de documentos. (351)

Aunque esta pastoral esta fuera de la época que analizamos creemos interesante reproducirla íntegra en el apéndice correspondiente (352) por ser expresiva de la simplicidad con que un sector del episcopado abordaba la cuestión social y explicaba la afiliación de los obreros a "organizaciones aconesionales o anticatólicas y revolucionarias", o buscaba la apoyatura de sus conservadoras consideraciones en la letra de la "Kerum novarum", repitiendo, cuarenta años más tarde, la postura que Jusell describe en la jerarquía española de 1891 ante la encíclica. El citado autor destaca, así, un interés "no excesivo" por tal cuestión y, sobre todo, el hecho de que "el análisis de la condición del obrero, cuando lo hay, es libresco, teórico, desvinculado de una realidad concreta y referido, mas bien, a unos países europeos industrializados"; residiendo la atención de los prelados en otros aspectos "como la pérdida de un lugar relevante para la Iglesia en la sociedad" y la añoranza de un mundo teocrático desaparecido, "las soluciones de los prelados -concluye el autor, en irse perfectamente aplicable a la pastoral referida, pese al transcurso de rechas- no pasan de

(351) Octubre de 1930, "Dirección Pontificia de la Acción Católica en España.- Documento de su Encia Avoma, sobre la creación de una 'Bolsa de trabajo' para obreros y patronos católicos", BOE de Palencia, año 81, 1 de junio de 1931, núm. 11, págs. 345-351. También hemos encontrado reproducido este documento bastantes rechas después de su redacción, en el boletín eclesástico de Zamora, si bien en este caso el retraso no era tan acusado como en el que acabamos de ver (Octubre de 1930, "Dirección Pontificia de la acción Católica en España.- Documento de Su Eminencia Reverendísima sobre la creación de una 'Bolsa de Trabajo', para obreros y patronos católicos", BOE de Zamora, año 68, 28 de febrero de 1931, núm. 3, págs. 33-37 y 22 de abril de 1931, núm. 5, págs. 65-68, conclusión.)

(352) Ver el núm. 4 del apéndice de "documentos complementarios" de este capítulo.

ser muy generales y carentes de todo sentido práctico e inmediato." (353)

No deja de ser relevante la referencia al eco de la "Rerum Novarum" en el episcopado español, dado que, como Simón señala, "A pesar de que Pío XI haya aportado en la 'Quadragesimo anno' algunos matices propios de la doctrina y de las directrices de León XIII, se puede, en efecto, afirmar que la 'Rerum Novarum' es, de 1891 a 1940, el mensaje auténtico de la doctrina de la Iglesia." (354) También Núñez de Arenas y Tuñón de Lara destacan el impacto producido por la encíclica en las filas católicas y los intentos de organización obrera a partir de ella. (355) Intentos que en España, como veremos, tuvieron el efecto ya apuntado al que alude Tusell.

Dejando a un lado estas consideraciones, del todo válidas por cuanto hasta el quince de mayo 1931 no suscribiría Pío XI su "Quadragesimo anno" -encíclica que, hay que destacarlo, no mereció comentario alguno por parte de los prelados españoles, ni, como se ve por los documentos sociales publicados por estos a raíz de ella, produciría en ellos ningún impacto- es relevante destacar ahora, aparte de la publicación de las pastorales del primado mencionadas, la circular del obispo de Barcelona, Dr. Manuel IRURITA

(353) TUSELL GÓMEZ, Javier, *Historia de la democracia cristiana en España*, Madrid, 1974, I, págs. 33-34. Al comentario reseñado de este autor hemos de añadir la constatación nuestra, en el período examinado, de la escasísima atención prestada en los boletines eclesiológicos al tema social, singularmente en comparación con el tratamiento dado a las cuestiones relativas a la legislación secularizadora. Como dato curioso podemos añadir que el boletín eclesiológico que más atención dedicó a este tema fue el de la diócesis de Segovia, si bien circunscribió su tratamiento a las noticias que daba sobre las actividades de "las católicas obreras", de las que más adelante daremos ejemplo.

(354) SIMÓN, A. *Santa Sede*, en AA.VV. *Historia del movimiento obrero español*, Barcelona, 1970, págs. 142-143.

(355) NÚÑEZ DE ARENAS, Manuel y TUÑÓN DE LARA, Manuel, *Historia del movimiento obrero español*, Barcelona, 1970, págs. 142-143.

ALMANDOZ, de 29 de abril. En ella indicaba que uno de sus principales intereses desde el inicio de su pontificado había sido la suerte de los obreros en paro, y, junto a él, el genérico por todos los obreros, su bienestar y la defensa de sus derechos, siendo para él "obligación sagrada... colaborar para que sean reconocidos en toda su plenitud". En base a estos planteamientos, mediante esta circular anunciaba la apertura de una suscripción para apoyar la labor que en favor de ellos venía realizando el "Instituto Pro Obreros sin Trabajo" y exhortaba al clero y fieles para que contribuyeran a ella.⁽³⁵⁶⁾

Más singular que esta circular y reveladora de los tanteos iniciales de las relaciones entre la jerarquía y las autoridades de la República, era la admonición que, siguiendo la misma línea de pensamiento, realizarían algunos miembros del episcopado anunciando una suscripción nacional promovida por el gobierno para atender a los obreros sin trabajo. Tal harían, según revelan los boletines eclesiásticos consultados, el arzobispo de Valladolid, Dr. Remigio GANDÁSEGUI GORROCHATEGUI y, copiando esta admonición casi literalmente, el obispo de Palencia, Dr. Agustín PARRADO GARCÍA.

"Habiéndose constituido en el Ministerio de la Gobernación una comisión encargada de ordenar y unificar la recaudación de fondos para atender al urgente problema de los obreros sin trabajo en España, como ramificación de ese organismo central se ha formado en esta Provincia, bajo la

(356) 29 de abril de 1931, "Circular IX.- En favor de los obreros", BOE de Barcelona, año 74, 30 de abril de 1931, núm. 8, págs. 266-267. Respecto a lo apuntado sobre el escaso impacto de la *Quadragesimo anno* en el episcopado español, queremos resaltar las frases de Baldomero JIMÉNEZ DUQUE sobre ello, aludiendo a "lo retardados que fueron siempre los españoles en la cuestión social". JIMÉNEZ DUQUE, Baldomero, *Espiritualidad y apostolado* en AA.VV. *Historia de la Iglesia en España*, V, *La Iglesia en la España contemporánea, (1808-1905)*, Madrid, 1979, págs. 406-409. También Rafael M^a SANZ DE DIEGO destaca que los obispos españoles no dedicaron inicialmente a la *Quadragesimo anno* la atención que se merecía, *La Iglesia española ante el reto de la industrialización*, op. cit. pag. 656.

presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil, una junta para dar impulso a la suscripción indicada, siendo su primer acuerdo el que los Alcaldes de los pueblos cabezas de partido constituyan a su vez juntas que estimulen a sus convecinos de la demarcación para allegar fondos en orden al mencionado fin.

«Por Nuestra parte, como perteneciente a esta Junta Provincial, encomendamos con todo encarecimiento a Nuestros celosos Curas de almas que pongan al servicio de este noble y caritativo propósito los valiosos medios que el prestigio de su cargo les da en sus feligresías y sus personales dotes de experiencia y comprensión, a fin de que el resultado de estas suscripciones o donativos corresponda en lo posible a lo justificado de la necesidad.»⁽³⁵⁷⁾

Sobre esta iniciativa, el editorial de "El Debate" titulado "El Seguro del Paro", de 28 de mayo de 1931, criticaría que se basara en un decreto del gobierno, sin esperar a la constitución de las nuevas Cortes, pero alabaría el fundamento de la medida, llamando la atención de los católicos sobre la necesidad de atender la cuestión social en España, en línea con la "Quadragesimo anno", recién publicada, aunque no vería la luz en los distintos boletines eclesiásticos hasta el mes siguiente.⁽³⁵⁸⁾

Encontramos la siguiente alusión a la cuestión obrera en la noticia publicada por el boletín eclesiástico de Segovia sobre la fiesta de fin de curso en la "Academia nocturna y Caja dotal de obreros" en la que se describía

(357) 26 de mayo de 1931, "Sobre la suscripción nacional para atender a los obreros sin trabajo", BOE de Valladolid, año 56, 26 de mayo de 1931, núm. 5, pág. 57 y 8 de junio de 1931, "Suscripción nacional en favor de los obreros sin trabajo", BOE de Palencia, año 81, 17 de junio de 1931, núm. 12, pág. 882.

(358) Es en el boletín eclesiástico de la diócesis de Pamplona en el primero en que hemos visto, entre los consultados, publicada la encíclica, lo cual efectuaría en el núm. 1711 de 1 de junio; esta publicación se realizaría en las restantes diócesis a lo largo de todo el trimestre siguiente, en fechas muy variables y, como ya hemos indicado, sin comentario alguno del episcopado. Ver en el núm. 5 del apéndice de "documentos complementarios" el editorial de "El Debate" aludido.

esta institucion sostenida por la Accion catolica femenina de la diocesis, para la formacion de "obreras de fabrica, de la aguja y similares", destacando lo urgente de una obra como esa, que habia sido inaugurada en marzo de ese mismo año, "dada la actual condicion de las obreras", siendo su pretension formarlas "solida y cristianamente; darlas la cultura que necesita toda mujer en la vida moderna; ayudarias profesionalmente con la sindicacion, a la que se ira en momento oportuno y acostumbrarias al ahorro", pues, con independencia de la educacion que recibian se les acria una cartilla en una caja dotal en la que ingresaban una cantidad semanal, que, junto a los donativos "de personas pudientes", les seria entregada al contraer matrimonio o cumplir los 25 años."³⁵⁹

Menos anecdóticas que esta noticia eran las iniciativas que surgian en las distintas provincias eclesiasticas al confrontar la difícil situación de la clase obrera, confrontacion que, no obstante, desembocaria en actitudes eclesiasticas no innovadoras y ligadas a la postura que, en el terreno social, la jerarquia venia arrastrando del pasado, es decir, y como los distintos autores destacan, dando soluciones que no respondian a la aparicion de la gran industria ni a la de los nuevos sindicatos. No tenemos datos del inicio de este intento de acercamiento y soluciones cerca del mundo obrero mas que a traves de las actas de las conferencias de la provincia eclesiastica de larragona que, ya en 25 de mayo de 1931 acordaria la creacion de una "Comision de orientacion social" integrada por distintos movimientos de Accion católica y asociaciones de seglares."³⁶⁰

(359) s.f. "Fiesta de la Academia y Caja dotal de obreros", BOE de Segovia, año 76, 15 de junio de 1931, num. 11, págs. 238-240.

(360) *Esglesia i Estat durant la segona...* I, pág.63. La descripción de esta Comisión y de sus objetos y fines, eminentemente formativos y religiosos en el terreno social, serian remitidos por el cardenal VIDAL al Secretario de Estado vaticano

Posteriormente, en la reunión de la conferencia tarraconense de siete de agosto se perfilaría el objetivo de la citada Comisión en el terreno social, que tendría por misión principal la difusión de las doctrinas sociales de la Iglesia.

"Para obtener la tan necesaria aproximación de las masas obreras a la Iglesia, urge, entre otras cosas, divulgar ampliamente entre dichas masas las enseñanzas de la Iglesia en materias sociales. A este fin dedicará parte de su actividad la nueva Comisión de orientación católica..."

Aparte de la preocupación por la ola de huelgas que arrasaría al país durante 1931 y que se refleja en la correspondencia mantenida por el cardenal VIDAL tanto con el Secretario de Estado vaticano como con miembros de la jerarquía eclesiástica y civil española y que, en base a estos disturbios sociales y su consiguiente violencia, le lleva a propugnar constantemente la necesidad de una obra de concordia, "el documento que en una forma mas completa y relevante trataría de la cuestión social en esos momentos sería, precisamente, el elevado por la provincia tarraconense a las Cortes constituyentes y al que nos referimos ampliamente en el proximo capítulo. Documento que, sin embargo, no contendría idea propia alguna limitandose a reproducir párrafos íntegros de la encíclica de Pío XI sobre la cuestión tratada."

en su mencionada carta de 27-30 de junio de 1931, Op. cit. págs. 94-95.

(361) Op. cit. pag. 190.

(362) Op. cit. págs. 169-170; 181-182; 206; 212-213; 438; 439-440 y 446.

(363) "La condición obrera.- Si como Obispos lamentamos las libertades de perdición que tan funestas son y serán para las almas y el bien público, aplaudimos en cambio la libertad de asociación para los obreros, pues bien entendida y practicada puede ser origen de notables frutos. Para esto no tenemos más que volver los ojos a la encíclica de León XIII *Rerum novarum*, que tantas esperanzas puso en la asociación obrera, y en la recienteísima de Pío XI *Quadragesimo anno*, que es confirmación y complemento de aquella. Citemos siquiera algun párrafo de la última:

El hecho apuntado de que el episcopado español no hiciera innovación alguna en la aplicación de la doctrina eclesiástica sobre la cuestión social durante el período examinado y, fundamentalmente, que no introdujera alguna coordinada lo suficientemente atractiva para el mundo obrero como para paliar su afiliación a los pujantes sindicatos aconfesionales, no quiere decir que no intensificara, en la

«Apenas es necesario recordar que lo que León XIII dejó enseñado sobre la forma política de gobierno, debe aplicarse, guardada la debida proporción, a los colegios o corporaciones profesionales, a saber: que es libre a los hombres escoger la forma de gobierno que quieran con tal queden a salvo la justicia y las necesidades del bien común.

«Ahora bien, como las habitantes de un municipio suelen fundar asociaciones con fines muy diversos, en las cuales es competamente libre inscribirse o no inscribirse, así también los que ejercitan la misma profesión formarán unos con otros sociedades igualmente libres para alcanzar fines que en alguna manera estén unidos con el ejercicio de la misma profesión.

«Nuestro predecesor describió clara y discretamente estas asociaciones; nos basta, pues, inculcar una sola cosa: que el hombre tiene facultad libre no solo para fundar asociaciones, de orden y de derecho privado, sino también para escoger libremente el estatuto y las leyes que mejor conduzcan al fin que se proponen. Debe proclamarse la misma libertad para fundar asociaciones que excedan los límites de cada profesión. Las asociaciones libres que están florecientes y se gozan viendo sus saludables frutos, vayan preparándose el camino para formar aquellas otras agrupaciones mas perfectas, de que hemos hecho mención, y promuévanlas con todo denuedo, según el espíritu de la doctrina social cristiana.

«Vease ahora cómo habla del principio directivo de la justa distribución:

«Ahora bien, para obtener enteramente, o al menos con la posible perfección, el fin señalado por Dios, no sirve cualquier distribución de bienes y riquezas entre los hombres. Por lo mismo las riquezas, incesantemente aumentadas por el incremento económico social, deben distribuirse entre las personas y clases, de manera que quede a salvo lo que León XIII llama la utilidad común de todos, o con otras palabras, de suerte que no padezca el bien común de toda la sociedad. Esta ley de justicia social prohíbe que una clase excluya a la otra de la participación de los beneficios. Violan esta ley no solo la clase de los ricos, que, libres de cuidados en la abundancia de su fortuna, piensan que el justo orden de las cosas está en que todo rinda para ellos y nada llegue al obrero, sino también la clase de los proletarios, que, vehementemente enfurecidos por la violación de la justicia y excesivamente dispuestos a reclamar por cualquier medio el único derecho que ellos reconocen, el suyo, todo lo quieren para sí, por ser producto de sus manos; y por esto, y no por otra causa, abugnan y pretender abolir dominio, intereses o productos adquiridos mediante el trabajo. sin reparar a qué especie pertenecen o qué oficio desempeñan en la convivencia.

medida de lo posible, su acción en pro de las asociaciones y sindicatos católicos tradicionales.

La primera noticia encontrada en este sentido en los boletines eclesiásticos consultados es la referencia aparecida en el de la diócesis de Palencia dando cuenta del acto de clausura de la "Asamblea de la Federación Católico-

humana, y no debe olvidarse aquí cuán inepta e infundada es la apelación de algunos a las palabras del Apóstol: "Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma". El Apóstol se refiere a los que, pudiendo y debiendo trabajar, se abstienen de ello, amonestando que debemos aprovechar con diligencia el tiempo y las fuerzas corporales y espirituales, sin gravar a los demás, mientras nos podamos proveer por nosotros mismos. Pero que el trabajo sea el único título para recibir el alimento o las ganancias, eso no lo enseñó nunca el Apóstol.

«Dése, pues, a cada cual la parte de bienes que le corresponde, y hágase la distribución de los bienes creados vuelva a conformarse con las normas del bien común o de la justicia social; porque cualquiera persona sensata ve cuán grave daño trae consigo la actual distribución de bienes, por el enorme contraste entre unos pocos riquísimos y los innumerables pobres.

«Ni son menos notables sus avisos sobre la redención del proletariado,

«Es verdad que la condición de proletariado no debe confundirse con el pauperismo; pero es cierto que la muchedumbre enorme de proletarios por una parte, y los enormes recursos de unos cuantos ricos por otra, son argumento perentorio de que las riquezas multiplicadas tan abundantemente en nuestra época, llamada del industrialismo, están mal repartidas e injustamente aplicadas a las distintas clases.

«Desaparición del proletariado por medio de la accesión a la propiedad. Por lo cual con todo empeño y con todo esfuerzo se ha de procurar que, al menos para el futuro, las riquezas adquiridas sólo con medida equitativa pasen a manos de los ricos, y se distribuyan con bastante profusión entre los obreros, no ciertamente para hacerlos remisos en el trabajo, porque el hombre nace para el trabajo, como el ave para volar, sino para que aumente con el ahorro su patrimonio, y, administrando con prudencia el patrimonio aumentado, puedan más fácil y seguramente sostener las cargas de su familia, y, salidos de las inseguridades de la vida, cuyas vicisitudes tanto agitan a los proletarios, no sólo estén dispuestos a soportar las contingencias de la vida, sino puedan confiar en que, al abandonar este mundo, los que dejan tras sí quedan de algún modo proveídos.

«Todo este que nuestro Predecesor no sólo insinuó, sino proclamó clara y explícitamente, queremos una y otra vez inculcarlo en esta nuestra Encíclica; porque, si con vigor y sin dilaciones no se emprende para llevarlo a la práctica, es inútil pensar que puedan defenderse eficazmente el orden público, la paz y la tranquilidad de la sociedad humana, contra los promotores de la revolución.»

Agraria". "" Al acto habia asistido el obispo quien pronunciaria el obligado discurso con las ideas eclesiasticas de la epoca sobre el caracter de los sindicatos, de la lucha obrera o del orden social, destacando, de este modo, que el liberalismo economico habia iracasado rotundamente siendo condenado por Leon XIII en la "Rerum novarum", por lo que era entonces necesario el cooperativismo, debiendo, pues, los socios de la Federacion ser apóstoles de ella y de sus sindicatos. Esta estrecha colaboracion era precisa porque si habia espiritu social cristiano habria espiritu social verdadero, siendo, así, la colaboracion con estas asociaciones el medio para obtener

"...los beneficios morales y materiales que tan necesarios son a la Sociedad y de los que tanto necesita nuestra querida España, tan envenenada en los momentos actuales, por los odios y luchas iraticidas. Y nosotros, como catolicos, debemos ser -pues estamos obligados a ello- los mas decididos, para evitar que germinen esas pasiones que tanto perjuicio ocasionan a nuestra amada Patria." ""

Muy similar a este planteamiento seria el dado en la tambien clausura de la misma Federacion en la provincia de Avila, acto en el que, leida la memoria del año anterior con las distintas actividades economicas y sindicales

(364) La Confederación Nacional Católico-Agraria era un movimiento sindical campesino, muy vinculado a la Asociación Católica Nacional de propagandistas e implantada fundamentalmente en las dos Castillas, Navarra y Aragón. Con la Liga Nacional de Campesinos seria la base electoral del grupo agrario para las Cortes constituyentes, *Església i Estat durant la segona...*, II, pag. 158, nota, 2. El cardenal VIDAL recomendaba, por carta del 22 de noviembre de 1931 al ministro de Economía, Nicolás D' OLIVER, la petición de esta Confederación de estar representada, como antes, en la Junta Nacional de Crédito Agrícola, prueba mas del interes de la jerarquia en este tipo de movimientos sociales. *Ibidem*. Como se recordara en el "memorial de agravios" elevado por SEGURA al presidente del Gobierno provisional con fecha 3 de junio se incluia la queja de la "privación de derechos civiles a la Confederación Católico-Agraria, recisamente por ser católica". Ver la nota 106 de este capítulo.

(365) s.f. "Crónica Diocesana.- Asamblea de la Federación Católico-Agraria", BOE de Palencia, año 81, 9 de octubre de 1931, num. 22, págs. 677-678.

realizadas, habían intervenido MARTÍN ARTAJO, de la "Confederación Nacional Católico-Agraria" y el obispo de la diócesis.

Así el primero se había referido, en su discurso, a "las siembras de odio que vienen efectuandose en España" fruto en parte de la avaricia y la usura, que negativamente habían influido en el agro, criticando "a los poderosos que no quisieron sacrificarse económicamente para mejorar la situación de los humildes" por lo que había que rectificar y "tornarse generoso para no caer en el derrumbadero". Tras estas tradicionales ideas que, desde luego, no pretendían la verdadera justicia social, trataba de la necesidad de "abordar decididamente la labor social" lo cual se haría "estableciendo mutualidad en que se de entrada a los obreros". Respecto al mundo agrario había destacado la reciente legislación a él aplicable, aconsejando a los labradores que se integraran en los nuevos jurados mixtos de la Propiedad rústica y del Trabajo rural, creando para ello organismos apropiados. Tras referirse a la reforma agraria y a la necesidad de ampliar la acción del sindicato "que no debe ser solo un organismo para pedir préstamos", acabaría recomendando

"...a todos que luchen para oponer los ideales católicos a los materialistas sin olvidar que hay que atender a las necesidades de los humildes porque para que las propagandas cristianas tengan éxito no se puede olvidar que no todo consiste en predicar sino que también hay que dar trigo."

La intervención del Dr. PLA Y DENIEL seguiría, como es lógico, la misma tónica de ideas, destacando que se estaba "en horas de crisis", pero que, al tiempo eran "horas de serenidad" puesto que tales crisis no eran nuevas en la historia. La revolución, indicaría, se había llevado a los campos, resaltando que, si en ellos no se había hecho todo lo necesario, la Iglesia siempre se había preocupado por los

agricultores. Consideraba, como había constatado en su última visita pastoral, que existían "verdaderos jornales de hambre, había abusos que no deberían haber existido" y, si reconocía la "sed de propiedad" de los labradores, no dejaba de criticar al "nuevo dios" en que el Estado quería convertirse, que podía dar origen a la inhumanidad en los campos, puesto que no bastaban "la técnica y la práctica", ya que sin el espíritu la ciencia no podía ser fecunda.

En tal orden de ideas continuaba el cronista narrando cómo el prelado

"Se refiere a las predicaciones de antagonismo y de lucha y dice que sin el amor y la armonía no se puede triunfar, pues las utopías siempre fracasan como han fracasado en Rusia. Vuelve a recomendar la serenidad y aconseja que se atienda al jornalero evitando los jornales de hambre; que se preocupen todos del bienestar de los obreros y de los pequeños propietarios y que se procure que haya el mayor número posible de propietarios. Hay que evitar utopías en el reparto de las riquezas que pueden dar lugar a que la riqueza se extinga y "cuando no haya que repartir -pregunta- ¿qué será lo que se reparta?". Cuando la miseria se enseñoree de los trabajadores y de los propietarios -vuelve a interrogar- ¿quién será el que pague los tributos necesarios para el sostenimiento de la Nación?. Alude a las luchas sociales y dice que nosotros tenemos la Verdad y de ella debemos hacer nuestra bandera porque la doctrina de la Verdad es inmortal, así como la Iglesia que continuará viviendo siempre porque tiene la promesa de su divino Fundador. Dice que debemos ser hombres de fe y buscar el bien de los demás. Excita a los labradores a atraer a los obreros a sus Sindicatos y actuar socialmente dentro de la legalidad porque "la abstención - afirma- es un suicidio". Termina manifestando que no tenemos derecho a recurrir a la violencia, pero sí a la obligación de no ser cobardes y obrar con serenidad de cristianos para que la verdad y el bien resulten siempre triunfantes." (366)

(366) 14 de octubre de 1931, "XI Asamblea de la Federación Católico-Agraria", AGE de Avila, año 42, 22 de octubre de 1931, núm. 12, págs. 463-469.

Mas así como hemos apuntado que el episcopado español no habia prestado atención al contenido de la enciclica "Quadragesimo anno", otro interés de la jerarquia manifestado por las fechas a que nos estamos refiriendo venia a implicar, realmente, una actuacion paralela a la iniciada por el gobierno respecto a la suscripcion nacional para atender a los obreros sin trabajo a que ya hemos aludido, aunque ciertamente no tenia nada que ver con ella puesto que respondia, ahora sí, al deseo expresamente manifestado por el papa en su enciclica del día dos de octubre de 1931 sobre la crisis económica, el paro torzoso y el exceso de armamento y en la que habia invitado a los obispos de todo el mundo a realizar colectas en pro de los obreros sin trabajo, dada la crisis del mundo laboral por el "trastorno de la economía de las naciones", y la cercanía del invierno. Para atender este deseo pontificio los distintos prelados expondrían casi literalmente las ideas de Pío XI contenidas en esta carta apostólica.

Citándonos a los boletines consultados el primer obispo que en España secundaria la iniciativa del pontifice seria el Dr. Luciano FÉREZ PLAÍERO, obispo de Segovia, dándole en esta ocasión el positivo destino de que con los fondos allegados y, por medio de efectuar las oportunas reparaciones en los edificios de la iglesia diocesana, paliar la situación de los obreros sin trabajo."

(367) Preciso es resaltar aquí que la creación de la "Boisa Española de trabajo" efectuada por el cardenal SEGURA en 1930 no respondia a estos mismos propósitos, tratándose, como se desprende de la pastoral que reproducimos en el apéndice antes aludido, de un organismo integrado en la Acción Católica para realizar una obra social no perfilada en este documento y cuya virtualidad posterior desconecemos.

(368) Tal iniciativa la tomó el obispo por medio de una carta dirigida al dean de la catedral, como consultario de la Acción Católica diocesana y en ella, aludiendo a la intención del papa de celebrar la misa de la festividad de Cristo Rey "para que cesen las grandes tribulaciones que afligen a la Iglesia y pueblo católico en la nación española", invitaba a todos los fieles a participar en la misa que el mismo celebraría con igual intención, disponiendo al tiempo la apertura de la mencionada colecta, "a la que podrán concurrir los sacerdotes y

Tal iniciativa sería, como es lógico, secundada por toda la jerarquía, si bien sólo la hemos visto instrumentada a través de los respectivos boletines diocesanos en determinados casos, por lo que preciso es suponer otras vías de actuación, presumiblemente a través de las obras sociales de Acción católica.

Actuación muy relevante sería, entre estos referidos casos, la seguida por el Dr. Leopoldo EIJO Y GARAY, relevancia que, recordando necesariamente las circulares ya tratadas del cardenal SEGURA desde el exilio y, singularmente, la que venía a recomendar el poner a salvo los bienes de la Iglesia,⁽³⁶⁹⁾ no deja de ser extrema por cuanto aprovecharía la recomendación del papa para, enfrentándose a un problema claro y concreto, condenar, precisamente la evasión de capitales; si bien, hay que reconocerlo, no tan claramente como podía haberlo efectuado por cuanto que, más que ahondar en este hecho, que sólo citaba, desarrollaría el menos trascendente de la ocultación de numerario en el mundo rural; razón por la que aludiría en su escrito singularmente a la acción que cerca de sus feligreses podían realizar los sacerdotes en este ámbito. No obstante, la importancia de esta postura nos hace reproducir a continuación íntegramente este documento que el obispo de la capital del Estado plasmaría en forma de carta dirigida a todos los párrocos de su diócesis.

"Por considerarlo de interés primordial en las actuales circunstancias, me creo en el deber de llamar su atención sobre la necesidad de que

seguir que se sientan movidos por la caridad de Cristo y la voz dolorida de su vicario, para atender con su producto a la necesidad urgente que padecen nuestros hermanos, los obreros sin trabajo. A este fin hemos iniciado en el Hospital un plan de obras que proseguiremos con todos los medios a nuestro alcance, emprendiendo las necesarias y convenientes reparaciones en los templos y edificios de la Iglesia." (28 de octubre de 1931, "Cruzada de fealdad.- Una carta del Rvmo. Prelado al Dean de la Catedral", BUE de Segovia, año 76, 30 de octubre de 1931, núm. 20, págs. 442-443).

(369) Ver la nota 226.

extienda la actuación de su espiritual ministerio a un punto concreto que por las alarmantes proporciones que viene tomando en nuestra patria, con daño evidente para los intereses materiales de la misma, merece que se le oponga un dique que limite, atenué y aun remedie los estragos que realiza en la Economía nacional, sin beneficio alguno para los intereses privados de quienes en momentos de ofuscación han procedido de ligero, sin advertir los contraproducentes efectos que de su conducta se habían de derivar. Aludo con esto a la exagerada y constante evasión de capitales y ocultación de numerario por parte de las clases pudientes, que contribuyen con ello al quebrantamiento del crédito público y a la paralización de las industrias y de las transacciones mercantiles, con la natural intensificación del paro forzoso y el derrumbamiento de muchos hogares humildes, problema pavoroso cuya trágica visión se agiganta con la proximidad del invierno con todas sus crueldades y amarguras.

«Precisamente Su Santidad el Papa, en su reciente Encíclica, preconiza una cruzada de caridad y de socorro y exhorta a que se reafirmen los vínculos de paz individual y social mediante la ineludible ayuda espiritual y material a esas muchedumbres de obreros desocupados, y tiene frases de conmovedor y paternal afecto para los infelices niños que en los umbrales de la vida ven ya las tristezas que ella encierra. Nadie más indicado, ni con más eficaz autoridad, que el Pastor de almas para llevar a esos seres los consuelos de la oración y las advertencias que el Vicario de Cristo en la tierra expone en su documento. Y nadie, tampoco, como el Párroco rural para recomendar a sus feligreses las ventajas de la circulación del dinero atesorado y los peligros que encierra su ocultación, pues sin producirles nada lo tienen siempre expuesto a la rapacidad ajena y al riesgo fortuito, además de no contribuir en la medida correspondiente al fomento del trabajo y de la riqueza patria, hoy más que nunca indispensable si se quiere mitigar los desdichados efectos de una moneda depreciada y de una economía carente de impulso individual, que encauzado por sana orientación es, en suma, el verdadero exponente de la riqueza nacional.

«De su reconocido celo espero que sabrá interpretar en su verdadero sentido el alcance de estas instrucciones, exclusivamente inspiradas

por un espíritu patriótico y cristiano."⁽³⁷⁰⁾

Entre los boletines eclesiásticos consultados hemos encontrado reproducida esta carta únicamente por el de Pamplona, en un número de igual fecha que la que llevaba el de la diócesis de Madrid y con este destacado título: "Circular del obispo de Madrid-Alcalá sobre la evasión de capitales". A continuación de su publicación figuraban, además, estas rotundas frases del Dr. Tomás MUNIZ PABLOS: "Por la importancia y trascendencia de la anterior Circular, la hacemos nuestra y la recomendamos a nuestros Párrocos, para que obren según ella, pues también entre nosotros es de una gran oportunidad"⁽³⁷¹⁾

No sería esta línea de denuncia la seguida, sin embargo, por el resto del episcopado español para cumplir los deseos pontificios, acogiendo a una actuación menos comprometedora, como era la que hemos visto iniciada por el obispo de Segovia.

Así haría el obispo de Coria, Dr. Dionisio MORENO BARRIO, que insertaría en su boletín diocesano, a continuación de la encíclica del papa, una circular con el objeto preciso de encauzar el debido cumplimiento de los mandatos de la carta apostólica. La circular, plagada de tópicos paternalistas y de la que se encontraba ausente cualquier verdadero sentido de justicia social, comenzaba, siguiendo el pensamiento del pontífice, aludiendo a la indigencia de muchos hijos de obreros en paro, la injusta

(370) 30 de octubre de 1931, "Carta circular a los Párrocos", BDE de Madrid-Alcalá, año 46, 15 de noviembre de 1931, núm. 1546, págs. 415-416.

(371) 30 de octubre de 1931, "Circular del obispo de Madrid-Alcalá sobre la evasión de capitales", BDE de Pamplona, año 70, 15 de noviembre de 1931, núm. 1721, págs. 436-437.

distribución de las riquezas y la necesidad de lograr un más equitativo reparto, acorde con un trabajo honradamente realizado, a fin de "que el trabajo y el capital, en vez de luchar como enemigos se abracen y ayuden como hermanos".

Claro que este hermanamiento debía traer como consecuencia un uso ordenado de las respectivas ganancias, tanto por parte del obrero como del patrono, lo que contribuiría o bien a que no hubiera crisis económica, o a que ésta se paliara prontamente.

Pero para que no sólo el patrono pagara buenos jornales sino para que el obrero realizara un trabajo honrado, sin idea de perjudicar a aquél, la solución dada por el obispo no era otra que indicar que era preciso

"...cristianizar más y más al obrero; es necesario que no lea la prensa anticristiana, destructora de toda idea de caridad e impulsora de todos los odios, es necesario que lea la prensa buena, las lecturas educadoras y sanas; es necesario que vuelva a la Religión, oyendo misa y descansando los días festivos..."

Para lograr estos propósitos los ricos, por su parte

"...deben favorecer copiosamente las publicaciones católicas, recomendando su prosperidad y su lectura, seguro de que con ello levantan un baluarte inexpugnable en defensa de su bienestar y de la paz..."

Mas como estas medidas llevarian su tiempo y necesario era afrontar lo inmediato del invierno, de acuerdo con lo indicado por el papa, el prelado recomendaba concretamente el empleo de obreros en las empresas que lo pudieran hacer, ya que ello era más justo y valioso que la limosna gratuita. Mas si aquello no podia realizarse necesario era, decia, "que corran abundantes las limosnas organizadas de los ricos", a cuyo efecto indicaba los

organos -no incardinados en la Accion Católica- encargados en la diócesis de hacer esta labor. (372)

Aunque no la hemos localizado en el correspondiente boletín diocesano, por la prensa sabemos que también el obispo de Zamora seguiría un criterio similar al precedente, exhortando a sus feligreses la entrega de donativos en las parroquias para paliar la situación de paro de los obreros de la diócesis. (373)

A cuatro obispos nos queda por referirnos para ejemplificar el seguimiento del contenido de la encíclica de Pío XI de dos de octubre de 1931 por parte de la jerarquía española: el Dr. Mateo MUGICA, el Dr. IRURITA, el Dr. ROCHA PIZARRO y, nuevamente, el Dr. EIJO Y GARAY.

El obispo de Vitoria, se limitaría en su circular de 25 de noviembre, a glosar las palabras del papa, aludir a la labor realizada por la Iglesia a través de los siglos y a encargar a la Secretaría de Cámara y gobierno del obispado, a través de las Juntas de Acción Católica de la diócesis, la recaudación de limosnas para los obreros en paro de la diócesis. (374)

(372) 1 de noviembre de 1931, "Circular núm. 36.- Cumplimiento de la precedente Encíclica", BOE de Coria, año 66, 15 de noviembre de 1931, núm. 22, págs. 345-350. Lo paradigmático de este documento en punto al pensamiento más tradicional de los prelados de la época nos lleva a incluirlo íntegro en el apéndice. Ver el apéndice núm. 35.

(373) "El obispo de Zamora pide a sus feligreses caridad para los obreros", "El Sol", 16 de noviembre de 1931.

(374) 25 de noviembre de 1931, "Circular núm. 115.- En favor de los obreros en paro forzoso y de sus pequeñuelos", BOE de Vitoria, año 67, 1 de diciembre de 1931, núm. 26, págs. 713-717.

El obispo de Barcelona no suscribiría un documento particular sobre la encíclica sino que aprovecharía la anual pastoral sobre el adviento para referirse tanto a ella como al telegrama enviado por el papa a los católicos españoles y del que más adelante hablamos. En relación con la carta apostólica se referiría el prelado a los "honrados obreros", destacando la gravedad del paro en la ciudad "y en otros centros fabriles de nuestra Diócesis" y, por ello, emplazaba a los fieles ante "el Tribunal de Cristo", para que abundaran "en sentimientos y obras de amor generoso hacia los pobres de Cristo", ya que ello conduciría a dar "un pedazo de pan a esos niños hambrientos, vestidos a esos pobres desnudos, donativos a los honrados obreros en paro forzoso". A tal fin se ofrecía a recibir los correspondientes donativos, aunque también invitaba a los fieles a dirigirse a cualquiera de las instituciones benéficas de la diócesis, señalando como "muy adecuada al efecto", el Instituto Pro-Obreros sin trabajo, ya apoyado en su circular de 29 de abril y que, según indicaba era "merecedor de toda confianza y aplauso por su actuación inteligente, desinteresada y celosa."³⁷⁵

(375) 21 de noviembre de 1931, "Carta pastoral de Adviento que su Excelencia Reverendísima dirige al clero y fieles de la Diócesis.- Ante el Tribunal de Cristo", BOE de Barcelona, año 74, 21 de noviembre de 1931, núm. 21, págs. 618-632. Es preciso destacar aquí que entre esta pastoral y la circular de 29 de abril, el 19 de julio había redactado el Dr. IRURITA otra pastoral en la que, dada la situación religiosa que atravesaba España, quería exponer a los fieles sus inquietudes y exhortarlos a permanecer firmes en sus creencias. Entre estos fieles el obispo de Barcelona se referiría expresamente a los obreros, en esta ocasión con palabras dirigidas a convencerles de la bondad de permanecer en la Iglesia -ya que todas las instituciones de esta eran "el pueblo"- más que preocupadas por su situación social:

"Tenemos también nuestro pensamiento fijo en vosotros, obreros amadísimos; y al par que nos afligimos con las aliciones y trabajos que debéis soportar para ganar el pan de cada día, nos angustiamos indeciblemente al veros, a muchos de vosotros, ovidados de las prácticas religiosas, abrigando desdenes y hasta odios contra la Iglesia Católica, como si fuera enemiga vuestra, siendo así que es vuestra Madre y amparadora. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica, fundada por el obrero divino, Cristo Jesús, vaya contra los derechos legítimos de los obreros? Y, ¿cómo habíamos de estar contra vosotros, los sacerdotes que somos casi todos hijos de obreros? Os engañan, os engañan criminalmente; y

El obispo de Aretusa y vicario capitular de Toledo suscribiria el dos de diciembre una circular en linea exacta con la del Dr. Mateo MUGICA, es decir, de mero contenido religioso, aludiendo, respecto a los obreros, a la "inocencia" y "humildad de su condicion social" de los que carecian de bienes de fortuna y ofreciendose a recibir y distribuir los donativos que los fieles dieran para secundar las directrices del papa.

El obispo de Madrid-Alcala, por ultimo, redactaria una exhortacion pastoral ante la inminente Navidad, en la que si no aludia -como habia hecho en su anterior documento- a la enciclica del papa, venia a secundar mas directamente sus deseos al referirse, en este caso si, a donativos para paliar la situacion de paro forzoso. No obstante, y a diferencia de los otros preladados, no establecia una colecta para este especifico fin, sino que anunciaba que a el se destinaria una parte de lo recaudado en la festividad del

muchos de vosotros, así engañados, a riegos os levantais para destruir lo que es vuestro, lo que es del pueblo, lo que sirve para la satisfacción de vuestras necesidades y nobles aspiraciones. Porque los templos son vuestros, son las casas sociales del pueblo fiel; vuestros son los ministerios sacerdotales, pues los sacerdotes somos los criados voluntarios, que os servimos en los menesteres más apremiantes y más sublimes; vuestros los Colegios religiosos, los Asilos y Hospitales y Conventos donde los Religiosos, hijos del pueblo, se inician diariamente por la instrucción de los ignorantes y socorro de los necesitados y cuidado de los enfermos. Y no son menos vuestros ni menos útiles esos Monasterios de vida contemplativa, porque allí se expia por vuestros pecados y se ruega por vosotros, se aplaca la ira divina y se atrae sobre la tierra culpable el rocío de la misericordia de Dios. Respetad esta casa, que es del pueblo. Este letreiro poniese, no ha mucho, en las puertas de algunas Casas Religiosas, para sustraerlas al furor popular que queria incendiarias. Si, son del pueblo, pero son del pueblo, mucho más cuando están ocupadas que cuando estaban vacías de los religiosos fugitivos o expulsados. (19 de julio de 1931, "Exhortación pastoral de S.E. Reverendísima", BDE de Barcelona, año 74, 24 de julio de 1931, núm. 14, págs. 445-458).

(376) 2 de diciembre de 1931, "Carta circular del Excmo. Sr. Vicario Capitular.- Sobre el socorro a los obreros parados", BDE de Toledo, año 87, 16 de diciembre de 1931, núm. 23, págs. 413-414.

dia veinticinco y, lo que es más interesante, volvía a insistir en el tema del capital escondido u ocioso. Estos son los párrafos más relevantes de esta pastoral:

"Por eso en esta extraordinaria crisis por la que atraviesa nuestra sociedad con tantos obreros parados, que equivale a decir con tantos hogares sin pan, hemos apelado a un recurso extraordinario también, y bajo Nuestra dirección, con Nuestra más ferviente bendición y ayuda, la Acción Católica de la Mujer, tan fecunda en buenas obras, está organizando el suministro de comidas a familias necesitadas. Las religiosas, que, abandonando el mundo, se han consagrado por amor de Dios a orar, a enseñar, a remediar los males del cuerpo y del alma, prepararan esas comidas. Ellas son pobres y pondrán lo que tienen: su trabajo; es necesario que los demás hermanos proporcionen el dinero que Dios les ha dado para bien de todos."

Al obrar así, entre otras realizaciones,

"Procuramos cooperar a que reinen la paz y la fraternidad cristiana, y se apaguen los odios fratricidas, que siembra el enemigo de todo bien, que solo se complace en la desgracia humana.

"Los que son cristianos comprenderán muy bien todo esto. Y los que por desgracia no lo sean, comprenderán que no es mala la religión que esto enseña. Y creyentes o no, los tristes atezados por la necesidad aceptarán nuestra ayuda como un abrazo de hermanos. La tribulación pasará; el amor fraterno perdurará embelleciendo con su sonrisa amable la vida humana...

"Por lo pronto, hemos ordenado que la mitad, al menos, de cuanto se reúna en la colecta que el día 25 se hará en todas las iglesias, se destine a esa gran obra; el clero pasará con gusto estrechez sabiendo que a trueque de ella alivia la situación de los más necesitados; y por lo que atañe al Cuito, os aseguro amados Hijos, que mucho más grata será al Señor esa caridad que el aroma del incienso...

"Ese destino tendrán siempre en parte vuestros donativos, tanto de la suscripción como de las colectas pro cuito y clero." "Nuestro propósito es vigorizar con ellas la vida cristiana de las

parroquias organizando de modo eficaz la beneficencia parroquial, de suerte que con gran parte de los donativos recogidos y con vuestra cooperacion personal (porque mayor caridad es visitar a los pobres y llevarles amorosamente el socorro que desprenderse del dinero para él) emprenderemos una vigorosa "Cruzada de Socorro Fraterno"...

"Cierto, que la mejor forma de socorrerlos seria proporcionales trabajo; pero no esta a Nuestro alcance. A cuantos puedan darlo, los exhortamos muy vivamente a que lo hagan. Poco ha Nos dirigimos a Nuestro venerable Clero encomendandole que usase de todos los medios que su autoridad espiritual y su cultura le proporcionara para mover a los poseedores de recursos economicos a no retraerlos, a no ocultarlos dejandolos en esteril ociosidad, a no paralizar las industrias, la edificacion, los cultivos, las transacciones comerciales, la vida de los negocios por miedo a perdidas. No es buen inspirador el miedo; a veces es tan insensato, que el mismo acarrea el mal temido. Hoy repetimos el consejo: por el bien de España, por el de cada uno, cuantos puedan dar trabajo denlo, aironten, si sus calculos son temerosos, un mal menor para evitar otros mucho mayores; la mejor caridad para con tantos obreros parados y tantos desempleados como hay ya, seria darles trabajo, volver a reanimar el ritmo de la vida economica española y evitar un posible colapso, que seria la ruina de todos."

El Dr. EIJU Y GARAY continuaria condenando el lujo superfluo, que consideraba un ultraje a los necesitados, insistiendo, así, en la necesidad de ayuda al proximo, incluso si tal proximo era "enemigo" por haberse dejado "seducir, en su ignorancia o en su malicia, por vesánicas predicaciones" que le hacian "causar su propio mal y el tuyo", en cuyo caso, doble era la obligacion del creyente.

(377) Entre los consultados es este el unico prelado que haria esta distribucion, al menos en 1931, de las colectas destinadas al culto y clero. Ver en este sentido el apéndice sobre dicha materia.

(378) Hemos destacado nosotros este párrafo.

que debía atender tanto al cuidado corporal como al espiritual del necesitado.⁽³⁷⁹⁾

Cariz muy distinto al de los documentos hasta aquí examinados había tenido por estas fechas la pastoral del obispo de Oviedo, Dr. Juan Bautista LUIS Y PÉREZ, de 30 de noviembre de 1931, y que, por tal razón, merece tratamiento aparte.

Había aprovechado el prelado la festividad de la Inmaculada para, tras referirse a cuestiones doctrinales y a la situación del clero⁽³⁸⁰⁾ abordar la cuestión social desde el exclusivo punto de vista de la problemática planteada por los movimientos obreros. Como en el caso anterior también este documento merece ser reproducido aquí en sus principales párrafos; por la, a veces irónica, otras dura y, en todo caso, subjetiva crítica que contiene del mundo sindical de izquierdas; por el tópico canto a la bondad del obrero, descrito como carente de voluntad propia y títere de la ideología de tales sindicatos; por la también implícita, aunque muy leve, crítica al capitalismo —ceñida a una sola frase—; por la descripción de la violencia de las huelgas en la época, que a sus ojos justificarían la más absoluta conformidad y pasividad por parte de los trabajadores, y, en fin, por su visión de estos como seres utilizados como medios de fines injustificables en lugar de como hombres presionando por sus justas demandas. Lo sustancioso de este documento creemos nos excusa de esta extensa reproducción.

"Una de las mayores necesidades, a nuestro juicio, es la que padece la familia obrera, tan cristiana, tan abnegada y sufrida, y tan expuesta a

(379) 21 de diciembre de 1931, "Exhortación Pastoral sobre el socorro a los necesitados", BDE de Madrid-Alcalá, 1 de enero de 1932, núm. 1550, págs. 2-6.

(380) Ver el apéndice sobre culto y clero.

irreparables desventuras. Por un lado ve combatida su Fe y precisamente con la esperanza de un bienestar que según sus improvisados redentores solo tiene por enemigo su Fe, el tesoro espiritual que heredó de sus padres, tan felices en medio de su Áurea mediocridad. Por otro lado, el sindicato, la huelga, la violencia, amenazando su paz interior, dificultando su trabajo, su jornal y el pan de la esposa y de los hijos. Se aproxima el invierno y, al llegar, encontrará al pueblo obrero indefenso; frías las almas y hambrientos los cuerpos. La salud y el trabajo son el único patrimonio del obrero, que está administrado hoy por manos que lo otorgan con crueldad y avaricia. Cuando el obrero se retira del taller o de la fábrica en busca del bien ganado descanso, una horrible incertidumbre turba su sueño. ¿Tendré trabajo mañana? ¿Me encontraré al salir de casa con la orden de ir a la huelga que es el hambre del día para mi hogar, tal vez la pérdida de la vida y la consiguiente orfandad para mis hijos?

«Nadie como las esposas y las madres conocen los horrores de la tragedia que desata en sus hogares la huelga. Cuando el marido no trae a casa el jornal, hay que poner pan en la mesa como en los días de trabajo remunerado. Es la madre la que lo ha de procurar: sus recursos son: primero, las economías escasas, después, el crédito en la tienda, esperando días mejores; luego, el empeño de muebles y ropas, aun de las indispensables; por fin, la limosna. Cuando esta fuente se agota, la desesperanza y la maldición se adueñan de los espíritus que no tienen fe en una organización que les prometió un paraíso conquistado por la huelga y les dá un infierno anticipado. Si en este momento llega el agitador de muchedumbres con dinero y armas de combate, prometiendo la felicidad a cambio de la agitación y de la revuelta, de lo que llaman acción directa, reconozcamos que la muchedumbre está bien preparada, y que el éxito de una revolución nihilista es infalible, porque es una necesidad de la vida, si el obrero no está auxiliado en ese momento deficitil por la fe en una Providencia divina y la asistencia eficaz de la autoridad pública.

«Esto que os decimos no es un cuadro lírico, es una realidad íntima, angustiosa, de infinitos hogares que trasladaron a la calle multitud de

madres en una provincia que nos es muy querida, diciendo a la autoridad pública que sus maridos iban a la huelga por el imperio de la tiranía societaria, y que era preciso garantizar y proteger el pan del pueblo en la forma más fácil y segura y más fecunda para la nación entera que es la garantía y seguridad del trabajo.

«Las mujeres valencianas, que allá en Valencia fué donde se produjo este fenómeno social, no sabían seguramente que en otro país se habían anticipado, a pesar de ser inmensamente más rico, otros miles de mujeres. No lo necesitaban tampoco. Les bastó consultar consigo mismas para interpretar el pensamiento y el sentir de las mujeres que saben presidir la economía de una familia en cualquier país del mundo, para establecer esta ley social: la huelga es un crimen del que la provoca si el obrero no tiene asegurada la compensación del jornal que pierde. ¿Qué diremos si, además, es injusta, si se sabe de antemano que ha de fracasar en sus pretensiones? Entonces la huelga es la violencia y el asesinato no solo de patronos sino de los mismos obreros, es pistolismo, es el número incontable de víctimas sangrientas y el de víctimas incruentas producidas en todos los campos de la producción y de la defensa social...

«No se trata de un lirismo, no, ni de una sensibilidad exagerada y excusable en la mansedumbre y lenidad sacerdotal de un Obispo; se trata de una realidad tan imponente que el no estimarla, acusaría ceguera o insensibilidad en el observador. El que fué jefe del socialismo francés, cuando las huelgas no habían adquirido la inhumanidad que las caracteriza en nuestros días, dijo: "el solo recuerdo de las huelgas producirá horror en la humanidad futura".

«Pididle al Señor que desaparezca esta calamidad pública que clama la divina venganza. ¿Si no quedará sin castigo defraudar parte del jornal al obrero, que será impedirlo totalmente? Si se arrebatara el pan de la mesa de centenares de miles de obreros ¿cómo podrá haber paz y bienestar y alegría?..."»

(381) 30 de noviembre de 1931, "Fiesta de la Inmaculada.- El dogma y la oración.- Carta Pastoral del Obispo de Oviedo Dr. D. Juan Bautista Luis y Pérez". BGE de Oviedo, año 67, 1 de diciembre de 1931, núm. 23, págs. 345-358.

Dejando a un lado las reseñas en los boletines eclesiásticos de alguna que otra celebración de actos en relación con el mundo obrero que, al igual que hemos visto se daba en el caso de Segovia, venían a poner de manifiesto la consideración que este mundo merecía a la jerarquía,⁽³⁸²⁾ lo más interesante a abordar ahora, para finalizar el tratamiento de la cuestión social en el periodo analizado, es el acuerdo adoptado por la conferencia de metropolitanos que se celebró en Madrid los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931, respecto a los sindicatos católicos, tradicionalmente encuadrados en la organización confesional de Acción Católica.

La conferencia, condicionada en los temas a tratar por el resultado de la votación de la cuestión religiosa en el parlamento, como veremos en el capítulo siguiente, abordaría entre sus puntos, precisamente por este resultado y como estrategia a seguir por el mundo católico cara a la nueva situación político-religiosa de España, la cuestión de la reorganización de la Acción Católica, aprobando las correspondientes "Bases" para ello. La novena de dichas bases recogería la separación entre los sindicatos católicos y tal organización de seglares, de forma que

(382) Podemos indicar, como ejemplo, la reseña de los actos organizados el 31 de octubre y 1 de noviembre con motivo del nacimiento y presentación de la "Juventud Social Católica de Vitoria"; en las conferencias pronunciadas se hablaría de la importancia de la educación de la juventud obrera y de la "extrema indigencia del obrero", por lo que era necesario, como "remedio de las presentes vicisitudes y de las luchas que se avecinan, el decidido apoyo de los patronos católicos." (s.f., "Juventud Social-Católica de Vitoria", BOE de Vitoria, año 67, 15 de noviembre de 1931, núm. 25, págs. 696-697.) Igualmente, la de la distribución de premios a los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de la "Propaganda católica" en Palencia, acto en el que el obispo destacó la importancia de la formación y educación de la juventud obrera, señalando que tal educación no podía ser buena si prescindía de la religión; contestando a la alusión del concejal que, en representación del Ayuntamiento, había tratado en su discurso de la forma de salvar las dificultades económicas del centro, indicaría que "la conciencia católica de esta capital no consentirá desaparezca dicho centro cultural, en favor del proletariado." (s.f., "Crónica Diocesana.- En la Propaganda Católica", BOE de Palencia, año 81, 15 de diciembre de 1931, núm. 26, págs. 788-789)

las organizaciones economicas y profesionales quedaban simplemente adheridas a la Accion Catolica en el plano estrictamente religioso, siendo totalmente independientes en sus ambitos propios de caracter economico o profesional. (483)

A raiz de estos acuerdos, uno de los adalides de la época en el campo de la lucha social, el dominico padre Jose GARO, se aplicaria a la reorganizacion de "las fuerzas de Accion Catolica y de Accion Social", dando cuenta de su parecer sobre tal reorganizacion al cardenal VIDAL por carta de 12 de diciembre de 1931.

En dicha carta el sacerdote aludia a la buena disposicion encontrada en diversos puntos de España para "llegar a una aproximación o fusion de las fuerzas obreras afines"; no obstante habia una dificultad para ello y era "el reparo o escrupulo de prescindir del titulo de catolicos (484) en los Sindicatos (que tanto estorba en la práctica para corregir y enmendar los reglamentos) y el caracer de autorizacion u ordenes del Director Pontificio de la Accion Catolica en España."

A estas consideraciones anadia el dominico su parecer sobre la situacion social de España, muy expresivo del panorama real del momento:

"... la situacion social de España, lejos de mejorar, se agrava por momentos, y consta la intensa labor de propaganda y organizacion de los sectores extremistas del obrerismo (comunismo y sindicalismo anarquista), sin que pueda contenerlo ni el propio socialismo ni la politica de izquierda..."

(383) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, pag. 123.

(384) En bastardilla en el original.

Por esta razón el sacerdote instaba al cardenal la urgente aprobación por Roma de las bases de la Acción Católica, antes aludidas, a fin de que quedara totalmente separada "la Acción profesional o económica de la Acción Católica, para que aquella se desenvuelva con mayor libertad y sin riesgos comprometedores para la Iglesia, perdamos todo lo iniciado y la posibilidad de hacer nada el día de mañana, ante la nueva y más terrible catástrofe que amenaza."

El padre GAGO aconsejaba que las asociaciones obreras y de estudiantes se agruparan en un frente más extenso, prescindiendo del título de católicos, a fin de que no siguiera "todo detenido, como desgraciadamente lo está.", confiando que el cardenal así lo indicaría a los distintos obispos y a los provinciales de la Compañía y, por último en poder ser apoyado en la difusión de estos nuevos criterios de organización por los periódicos de derecha a través de "Prensa Asociada".⁽¹³⁸⁵⁾

Probablemente la petición hecha por el dominico de que el cardenal transmitiera sus ideas a los demás prelados hizo que, según parece -no hay constancia de ello, salvo las respuestas recibidas por el arzobispo- VIDAL remitiera esta carta a los distintos metropolitanos.

El primero en contestar a la probable petición de opinión por parte del cardenal fue el arzobispo de Valladolid Dr. Remigio GANDASEGUI, que, en carta de 15 de diciembre le indicaba que no se atrevía a dar su opinión favorable al asunto planteado por el padre GAGO sin estudiarlo detenidamente, "porque, a mi entender, se trata de una cuestión de mucha trascendencia, y no veo las

(1385) Op. cit., págs. 455-456. Sobre la organización "Prensa Asociada" ver lo indicado en la nota 3 de este capítulo.

ventajas que a la Iglesia reportaría la solución de dicho Padre."...

Más extenso que este temeroso y tradicional parecer sería el del obispo de Madrid-Alcalá, Dr. EIJÓ Y GARAY que en su carta de 26 de diciembre detallaría al cardenal VIDAL los pormenores de una entrevista que, al parecer por encargo de este, había mantenido con el padre GAFO. El sacerdote le había explicado "las dificultades con que ha tropezado la gestión de unión de los obreros católicos, con miras a formar un frente dilatado y una organización obrera de cerechas, que no lleve en su título el nombre de católica." Tales dificultades radicaban en los impedimentos que ponían los sacerdotes relacionados con los sindicatos que no querían que, sin orden de la Iglesia, se suprimiera de ellos la expresión de su confesionalidad.

El obispo de Madrid acogía muy favorablemente las propuestas del dominico a fin de poder contar con una fuerte organización sindical ligada a la Iglesia, lo cual veía factible a partir del núcleo de los afiliados a los hasta entonces sindicatos católicos, que esperaba se incrementarían rápidamente, "pues la masa obrera ni quiere a la Casa del Pueblo, ni al único.", todo ello siempre que se suprimiera el título de "católico" de los sindicatos confesionales, ya que, sin ello, no adquirirían los obreros suficientes..."...

(386) Op. cit. II, págs. 310-311.

(387) Op. cit. II, págs. 457-459. La importancia de esta carta en el conjunto de la cuestión tratada, dada su descripción de la situación político-social del país y la estrategia a seguir, según ella, por la Iglesia en el campo de la organización sindical, nos lleva, pese a su inclusión en *Església i Estat durant la segona República espanyola*, a reproducirla íntegra en el apéndice núm. 36 al cual incorporamos igualmente unas "Notas para la organización de los obreros católicos" que BATLLORI y ARBELLOA atribuyen al P. GAFO.

Más cautelosa que la tajante y progresista postura del obispo de Madrid-Alcalá sería la del arzobispo de Sevilla, Dr. ILUNDAIN, que en contestación al envío de la carta del dominico realizado por el cardenal VIDAL, distinguiría el tratamiento a dar a los sindicatos obreros del que habría que seguir con los de estudiantes, aconsejando, además, respecto a los primeros, su vinculación a alguna organización religiosa, a fin de que sus miembros no dejaran de recibir una formación de tal carácter. Así expresaría su parecer el 18 de diciembre:

"18. En atención a las circunstancias actuales, podría concederse autorización a los sindicatos católicos para suprimir el título de católicos, con tal que se asegure su carácter confesional en forma indirecta""", esto es, agregándose todos sus miembros a alguna asociación o círculo de carácter religioso instituido *ad hoc*, para que dentro de este reciban formación cristiana y fomenten el espíritu religioso; algo de esto han exigido en ocasión análoga los Sumos Pontífices en otros países.

"22. Creo que no hay necesidad de suprimir el carácter confesional católico de las asociaciones de estudiantes y de la Confederación de los estudiantes. Es más, temo que la supresión sería un jarro de agua helada, que apagaría el fervor que actualmente informa estas asociaciones.""

Desoyendo esta clase de razonamientos el arzobispo de Tarragona se inclinaba decididamente por seguir la postura del Dr. ELIJO Y GARAY y, así, al agradecer a los obispos su colaboración en el documento colectivo del que en el capítulo siguiente trataremos, añadiría una postdata en el escrito genérico enviado al obispo de Madrid, indicando en

(388) En bastardilla en el original.

(389) Op. cit., II, Págs. 271-272.

ella que le contestaría con calma al asunto del padre Garo, pero adelantándole que le parecía "muy bien razonado."⁽³⁹⁰⁾

Esta postura sería claramente reflejada por el cardenal en la carta que le escribiera al nuncio el 29 de diciembre y en la que, entre otros extremos, le anunciaba el envío adjunto de la escrita por el obispo de Madrid-Alcala, sobre la que decía, "creo va acertado". Por ello urgía conocer el parecer de la Santa Sede sobre las ideas del padre GAFU, ya que "el asunto es de trascendencia y oportunidad". No obstante le indicaba que antes él podía recabar el de los otros preladados de la Comisión y así podría darse mejor información al Vaticano. Sobre tal parecer el cardenal añadía "Como nada he de ocultar a V.E., presumo que los de criterio integrista opinaran en contra."⁽³⁹¹⁾

(390) Op. cit. II, pag. 310-311.

(391) Op. cit. II, págs. 308-309. Como tantas otras veces, no andaba nada descaminado el cardenal VIDAL, que el 9 de enero recibiría el parecer totalmente contrario del patriarca de las Indias, Dr. PEREZ RODRIGUEZ, basado en razones de oportunidad de actuación, y prefiriendo que la solución fuera dada desde otras instancias, como así sería finalmente hecho por la Santa Sede que crearía un "secretariado económico-social" diferenciado de la Acción Católica. Op. cit. II, pág. 459, nota 27.

10.2. La jerarquía y el clero: Obispos y arzobispos de Madrid-Alcalá, León, Ávila, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Málaga, Palencia y Santiago de Compostela .

A los dos días de escribir su circular sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos, el Dr. EIJÓ Y GARAY publicaría, en el mismo boletín eclesiástico en que se insertaría aquella otra dirigida específicamente al clero de su diócesis, al objeto de prohibir la actitud adoptada por muchos sacerdotes seculares y religiosos -según en la misma circular había constar- al proclamarse la República que, temerosos de las reacciones anticlericales que el nuevo régimen podía traer, se habían apresurado a ocultar su condición sacerdotal vistiéndose de seglares.

Esta prematura reacción debió producirse singularmente en Madrid, en razón de su capitalidad, pues no hemos encontrado reconvenções similares en estas fechas en ningún otro de los boletines eclesiásticos consultados. El motivo que propiciaba la intervención del obispo fue sin duda la causa de que, en esta ocasión, la admonición, para ser entendida principalmente por aquellos a quienes iba dirigida y quedara fuera de la curiosidad de otros a quienes era ajena, fuera escrita en latín, como solía suceder cuando los prelados querían transmitir mensajes al clero que solo a él incumbían por tratar de asuntos propios de la jurisdicción interna de la Iglesia que, por su índole, debían ser abordados con cautela y quedar fuera del conocimiento general de los fieles.

Este era, precisamente, el caso de esta circular, en la que el obispo reconvenía con singular dureza a sus sacerdotes, si bien admitía que la primera reacción en los

que de esta manera habrían obrado podía estar justificada, como también lo estaría, añadía, si llegaban días de agitación anticlerical; palabras estas que son prueba de la intranquilidad de la jerarquía ante la nueva situación política y que se veía tristemente confirmada, probablemente en mayor medida que lo hipotéticamente imaginado, por la ola de incendios que se producía al cabo de pocos días de la publicación de esta circular.***

(392) "Hace quince días cuando los inusitados movimientos populares celebraron la llegada del nuevo Régimen, fueron muchos los clérigos, seglares o regulares, que abandonando el hábito talar, se pusieron el laico. Ello pudo ser consecuencia en algún que otro caso de una laudable prudencia, aunque no en muchos otros, según se iba sabiendo el resultado de los acontecimientos; ya que los sacerdotes beneméritos que, según la costumbre, anduvieron con el hábito talar, no experimentaron ningún tipo de molestia.

«Por lo tanto, ya que lo estimamos grave, Nos urge enviaros esta carta; por lo visto, pasados aquellos días de movimientos populares y felizmente pacíficos, todavía muchos sacerdotes continúan llevando el hábito laico por las calles madrileñas. Este uso, hoy no se puede basar realmente en ningún motivo, y constituye una grave transgresión del canon 136. Si llegaran circunstancias más peligrosas, no dejarán de notarse por todos, y entonces será lícito a los cautos, para evitar algún mal, ocultar su estatuto sacerdotal fuera de casa. Sin embargo ello no está permitido, dadas las circunstancias actuales, pues se menosprecia la obligación y se genera el escándalo de los fieles...

«Por esto, os exhortamos a todos vosotros a que os abstengáis del vestido laico; os advertimos que a los transgresores les será aplicado por Nos el canon 2.379; ya que no encontramos ningún motivo de peso que los excuse. Quizá creeríamos prudente que los sacerdotes regulares no salieran de su casa con el hábito de su orden, si tal hábito por su forma o colores llama la atención; sin embargo, queremos advertirles que no les está permitido a los mismos llevar el vestido laico, sino que, al menos, en su lugar, deben vestirse de sacerdotes seglares.

«Esto, como queda claro, debe entenderse tan sólo para estos días, pero si llegaran otros días, lo que Dios no quiera, de agitación pública marcados de carácter anticatólico, entonces, quienes creyeran que están expuestos a algún peligro con un motivo razonable podrán llevar el vestido laico.

«Pero todo esto de ninguna manera está permitido ahora, y todos deben atenerse a lo prescrito en el canon 136, párrafo 1, bajo las penas del canon 2.379, cuya aplicación verdaderamente Nos produciría un gran dolor.»

26 de abril de 1931. "Circular núm. 94.- Al clero secular o regular sobre el uso del hábito talar", BOE de Madrid-Aitallá, año 46, 1 de mayo de 1931, núm. 1534, págs. 176-177. Ver en el apéndice núm. 37 el texto en latín de esta circular.

Si bien la reacción del gobierno provisional ante los agresores de los bienes de la Iglesia en mayo de 1931, aunque tardía, había sido alabada por el cardenal VIDAL, que, en carta de contestación a la de ALCALA ZAMORA del día 23, de la que ya hemos tratado, le expresaba el 14 de junio su satisfacción por los propósitos del gobierno "de mantener a todo trance el orden público, reparar el derecho vulnerado castigando a los autores de los desmanes que hemos lamentado, infundir en los ánimos la máxima confianza y evitar toda suerte de alarmas, que cunden fácilmente en el pueblo", también el cardenal aprovecharía esta carta para indicar al presidente la necesidad de que el gobierno y los funcionarios diesen pruebas de "serenidad, benevolencia y comprensión para con los sentimientos religiosos", petición que, según indican Batlloroi y Arbeloa, respondía a los frecuentes excesos de las autoridades locales en el arzobispado de Tarragona, en franco contraste con las buenas relaciones que el Dr. VIDAL I BARRAQUER mantenía con las primeras autoridades catalanas.⁽³⁹³⁾

La hostil actitud de los ediles republicanos contra la Iglesia no se ceñiría, ni mucho menos, a Cataluña, a juzgar por los comentarios de las cartas de otros prelados al cardenal. Así lo revelaría la del Dr. GOMÀ de 19 de mayo de 1931, en la que aludía al encarcelamiento de dos sacerdotes en Cascante, que, gracias a su intervención ante el gobernador, habían sido puestos en libertad condicional; en esta carta, a mayor abundamiento, se referiría el obispo a su temor ante las "barrabasadas de los seguidores, o

(393) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 69-72. Sobre las relaciones del Dr. VIDAL I BARRAQUER con los altos cargos de la Generalitat en la República, aparte de los testimonios contenidos en la obra citada, ver también la referencia que da Ramón MUNTANYOLA respecto a las autoridades de la propia Tarragona, *Vidal i Barraquer. El cardenal de la paz*, Barcelona, 1971, págs. 237-238, nota 1.

menos, de la autoridad", añadiendo que parecia que no les abundaba la gente de gobierno y que él debía entenderse con cuatro gobernadores de los que podía decir "cosas interesantes sobre su fisonomía". (394)

También encerraba este tipo de manifestaciones la carta del obispo de Solsona, Dr. COMELLAS, de 20 de junio de 1931, en la que comunicaba al cardenal VIDAL la detención por el alcalde de Navas del cura ecónomo de Puigreig y la inmediata liberación de este por el gobernador civil de Barcelona, tras recibir su oficio de protesta⁽³⁹⁵⁾ y, por último, la carta del arzobispo de Sevilla, cardenal ILUNDAIN, de 10 de mayo de 1932, en la que se refería a la falta de libertad de los prelados de Andalucía para realizar la visita pastoral de las diócesis, no porque existiera prohibición expresa por parte de las autoridades, sino porque, como indicaba, "el ambiente es tan asfixiante, y los Ayuntamientos están tan hostiles a la Iglesia en muchas partes, que sería una gran imprudencia, por ahora, la visita pastoral. Nos expondríamos a disturbios, o quizá agresiones. Es muy lamentable, pero es una realidad." (396)

(394) *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 59-60.

(395) Op. cit., I, pág. 77, nota 10.

(396) Op. cit., III, pág. 47. En esta carta también aludiría el cardenal al incendio del templo de San Julián en Sevilla, manifestando al de Tarragona la creencia, pese a las declaraciones contrarias de AZARA, y tal como en el mes de junio se descubriría, de que dicho incendio había sido intencionado:

"Ya se habrá U. enterado de que hace un mes fue presa de voracísimo y rápido incendio uno de los mejores templos de Sevilla, venerado por su antigüedad y sumamente estimable por los tesoros de arte. Nada ha quedado, más que las paredes desnudas. Todos los altares y toda la techumbre vino a ser ceniza en poco más de una hora. La general creencia es que fue intencionado. No se explica de otro modo."

Es difícil precisar, no obstante, las razones de la descrita actuación municipal, aunque, en casos, como sucedió con la detención del parroco de Villantini, en La Coruña, era respuesta a verdaderas provocaciones del clero. En esta ocasión, según narraba la prensa, dicho parroco había tocado a rebato las campanas para convocar al vecindario ante la casa parroquial, desde cuyo balcón había pronunciado frases contra el juez de instrucción, la guardia civil, las autoridades y la República, por lo que se le había instruido proceso por injurias.¹³⁹⁷ En todo caso la actitud de los ediles municipales -con independencia de los actos relativos a expropiaciones de bienes eclesiásticos o a imposición de tributos abusivos- descrita por estos prelados y a la que también se refiere Jusell¹³⁹⁸, no tenía, no obstante, parangón con hechos más graves que se habían producido en otras diócesis desde los primeros momentos de la República.

Tales fueron, singularmente y que nos constan, el asesinato del cura parroco de Villalaluente, en León, hecho que causó tanto impacto en la diócesis que el boletín eclesiástico publicó un número extraordinario únicamente con la circular que el Dr. ALVAREZ MIRANDA escribió para hacer constar su protesta, la de la diócesis, el clero y la parroquia donde el sacerdote desempeñaba su cargo desde 1889, "contra crimen tan atroz cometido con feroz ensañamiento y con odio salvaje y satánico, como se revela por los detalles y circunstancias horripilantes en que ha

(397) "El Sol", 27 de mayo de 1931.

(398) "Mas que las disposiciones del Gobierno de carácter general sobre la cuestión religiosa, lo que contribuía a agravar la existencia cotidiana en la República eran los desmanes de autoridades provinciales y locales que, demostrando un anticlericalismo infantil, atizaban un clericalismo que no lo era menos". JUSELL GOMEZ, Javier, *Historia de la democracia cristiana en España*, I, Madrid, 1974, pag. 166.

sido encontrado el cadáver del venerable y amado sacerdote", que era "apreciado y estimado de sus buenos feligreses, sin que Nos constase nada en contrario". Para pedir por el difunto y por el arrepentimiento y expiación de los asesinos establecía el obispo diversos actos de culto, desprendiéndose en su referencia a ellos la situación de violencia que se respiraba en la diócesis contra el clero.

"Oremos, pues, y oremos con fervor y constancia. ¡Cuanto nos duele oír amargas quejas de nuestros amadisimos sacerdotes por los insultos y amenazas de que son objeto por parte de los que pregonan la libertad, y la convierten en reprobado libertinaje, y obran llevados de rabioso sectarismo! Y por esto volvemos a decir: oremos para que cesen los crímenes y agravios, escándalos y pecados; y para que reine la paz y tranquilidad en nuestra amada Patria." (399)

Otra noticia de similar índole sería la relativa al asesinato del cura párroco de Paterna de Madera (Toledo) a manos de un bracero, quien según confesó, no tenía móvil alguno para hacerlo. (400)

(399) 4 de mayo de 1931, "Circular núm. 284.- El asesinato del Rdo. Párroco de Villafuente", BGE de León, 5 de mayo de 1931, núm. 8, págs. 199-201. Esta circular sería publicada también por el BGE de Palencia de 1 de junio de 1931 (Núm. 11, págs. 351-353), ya que, aún perteneciendo el pueblo de Villafuente a la diócesis de León, era de la provincia de Palencia; tras dicha publicación insertaba este boletín una contestación publicada por "El Diario de León" en respuesta a la noticia sobre el asesinato aparecida en "El Diario Palentino" en la que este periódico había asegurado "que había animosidad contra el párroco... indicando la conveniencia de que hubiera sido trasladado", suposición a la que había respondido el secretario de cámara del obispado de León pidiendo fuera rectificada "toda vez que en este Obispado no se ha recibido queja alguna contra dicho párroco, juzgando tendenciosa la suposición sentada". Pero contra esta postura eclesástica "El Sol", al dar también la noticia del asesinato, informaría que el párroco, que había desempeñado este puesto durante treinta y cinco años, "había tenido disgustos constantes con los vecinos por su intransigencia política". El rotativo calificaba el crimen de "repugnante" e informaba de la detención de cuatro vecinos y del seguimiento en el Juzgado de las diligencias correspondientes. ("El Sol", 5 de mayo de 1931)

(400) s.f. "Noticias de la archidiócesis", BGE de Toledo, 8 de julio de 1931, núm. 13, págs. 235-236.

La violencia contra el clero no finalizaría, empero, en 1931 y, así, y con independencia de las multas o encarcelamientos que bastantes sacerdotes siguieron sufriendo a consecuencia de su actitud antirrepublicana, los atentados criminales continuarían cometiéndose a lo largo del bienio.⁽⁴⁰⁾ Mas lo que aquí nos interesa resaltar es que el clima anticlerical expresado en hechos graves o menos graves, que había abierto la llegada de la República, fue la consecuencia de una determinada postura de la jerarquía respecto a sus sacerdotes, en la que, ante las durezas que podía acarrear el nuevo régimen, les exhortaban a la fortaleza en su ministerio.

Así, el 6 de junio de 1931, el Dr. Enrique PLA Y DENIÉL escribiría una pastoral dirigida al clero de su diócesis en la que destacaba cómo habían "comenzado momentos más difíciles y arduos para el ministerio pastoral" y, por ello se dirigía a sus ministros "para animaros y alentaros a

(40) Como muestra de ello nos referimos brevemente a lo siguiente:

28 de julio de 1931: Atentado contra el párroco de Larín (La Coruña) con colocación de una bomba en la techumbre de la casa parroquial, que derribó el techo causando grandes destrozos. La instrucción de diligencias judiciales dio lugar a la detención de tres presuntos autores. ("El Sol", 28 de julio de 1931).

2 de noviembre de 1931: Disparos contra dos sacerdotes en el pueblo de La Arboleda (Bilbao) que provocaron la muerte de uno de ellos y graves heridas al otro, dando lugar a la inmediata intervención de la guardia civil. Según la reseña "Los dos sacerdotes eran personas muy estimadas en el pueblo... donde el crimen ha producido general indignación. No se les conocían enemigos personales". ("El Sol", 3 de noviembre de 1931). El número del día cinco daría cuenta de la gran manifestación de duelo en el funeral y entierro del sacerdote, con asistencia de todo el vecindario "sin distinción de ideas políticas." También los boletines eclesásticos de las diócesis de Pamplona y Vitoria darían noticia de este atentado al referirse, el primero, a la misa de "Requiem" celebrada en la catedral de Pamplona, detallando que había "sido vívidamente asesinado por la espada" y destacando la concurrencia de fieles y las firmas estampadas tras la misa por los sacerdotes al pie de "una protesta contra el vandálico y sacrilego crimen y las causas que lo han determinado" (s.f. "Crónica diocesana." Sufragios del clero de Pamplona por el sacerdote Sr. Inchaurreaga, asesinado en La Arboleda", BDE de Pamplona, año 70, 15 de noviembre de 1931, núm. 1721, pág. 438). El de Vitoria daría cuenta, por su parte, de los funerales celebrados por esa diócesis en sufragio del fallecido.

airontar todos juntos los peligros del momento presente". Peligros y dificultades que no eran nuevos en la historia de la Iglesia, por lo que el cargo pastoral pedía en ellos

"...obrar cosas arduas,; aun mas, estar dispuestos a la persecucion hasta el martirio; al sufrimiento, a la prolongada contradiccion, martirio incruento a veces mas difícil de sobrellevar que el momentaneo martirio..., entregando la vida si es menester, consumiendola en el trabajo, en el sacrificio siempre, si no se quiere ser pastor mercenario. Algun Prelado ha visto su morada destruida y ha sido el acoso de las turbas; otros se han visto obligados a trasponer las fronteras de la patria. El Ministerio Episcopal arduo siempre por las responsabilidades ante Dios, se ha vuelto tambien

oficiados tanto por el desterrado Dr. MUGICA en su residencia francesa, como en Bilbao y Vitoria, destacando la gran concurrencia y las adhesiones recibidas de todos los fieles ("Gratitud por testimonios de condolencia recibidos" y "Funerales por el sacerdote asesinado en La Arboleda", BOE de Vitoria, año 67, 15 de noviembre de 1931, num. 25, págs. 694 y 695).

8 de noviembre de 1931: Insultos y agresiones por un desconocido al sacerdote y disputado a Cortes D. Ricardo GOMEZ RUJIL, a la salida de su domicilio en Madrid y realizacion de tres disparos contra un sacerdote en Barcelona, aunque sin llegar a herirle, ("El Sol", 8 de noviembre de 1931).

5 de enero de 1932: Atentado contra dos sacerdotes en Lamiaco (Bilbao), que produjo la muerte de uno de ellos y graves heridas en el otro. Al reseñar la conduccion del cadáver el periódico resaltaría la gran concurrencia de fieles y la presencia de diputados vascosnavarros, ("El Sol", 5 de enero de 1932). Segun informaría el rotativo al habiar del juicio seguido en este caso, el agresor era un obrero parado y la causa del atentado el creer que el parroco le habia excluido del reparto de donativos a obreros sin trabajo por ser republicano, razon por la que la defensa se habia basado en la perturbacion de sus facultades mentales, ("El Sol", 20 de abril de 1932). Tambien el boletín eclesástico de Vitoria destacaría la manifestación pública de duelo que tuvo lugar en el sepelio del sacerdote ("Funerales por el sacerdote asesinado en Lamiaco", BOE de Vitoria, año 68, 15 de enero de 1932, num. 2, págs. 47-48).

5 de enero de 1932: Agresion al parroco de Jijona (Alicante), suceso en el que habia tenido que intervenir el alcalde, concejales y la guardia civil para lograr sacarlo del pueblo, del que habia tenido que huir desde la instauración de la Republica a causa del anticlericalismo reinante y donde ahora se habia desplazado para un entierro ("El Sol", 6 y 8 de enero de 1932).

25 de mayo de 1932: Intento de agresion al parroco de Museras (Valencia), impedida por la actuacion de los vecinos, ("El Sol", 26 de mayo de 1932).

23 de agosto de 1932: Disparos contra un sacerdote, que resultó herido, en Toral de los Vados (León), ("El Sol", 24 de agosto de 1932).

arduo por la exposicion a toda suerte de peligros que no son meras fantasias; y el ministerio parroquial, participacion limitada, carisimos hermanos, de la cura pastoral del Obispo, no necesito encareceroslo, es hoy tambien mas dificil y expuesto."

A pesar de ello debian tener fortaleza, que se basaba en la fe y, junto a ello, era necesaria la prudencia, que exigia

"...conocimiento exacto de la realidad en que se opera; prevision del efecto que produciran los medios que se empleen, no precisamente del efecto que se desea, sino del que de hecho se puede esperar en tales sujetos y en tales circunstancias."

Por ello los sacerdotes debian conocer prudentemente el campo en que se movian, mas, en prevision de posibles actuaciones, pasaba a dar cuatro normas concretas sobre su

26 de enero de 1933: Disparos contra el parroco de Riveira (El Ferrol), que resultó herido. La guardia civil detuvo a los agresores. ("El Sol", 27 de enero de 1933).

4 de mayo de 1933: Amenazas de muerte y agresiones al parroco de Osaho de Villaderbos, (Orense), a quien se conminaba a dejar de decir misa en el pueblo. ("El Sol", 5 de mayo de 1933).

6 de mayo de 1933: Disparos contra el parroco de Erice de Atez (Pamplona), produciendole la muerte a causa de una discusion por pago de jornales a obreros. El autor fue absuelto por alegarse locura circunstancial. ("El Sol", 7 de mayo de 1933 y "El Debate", 16 de mayo de 1933).

22 de octubre de 1933. Disparos contra el ex-diputado sacerdote Sr. MOLINA a su llegada al pueblo de Valdeverja (Toledo), del que pudo salir sin ser herido. ("El Sol", 22 de octubre de 1933).

19 de noviembre de 1933. Atentado contra el parroco de Santa Juliana de Abanto (Vizcaya) que, al ir a votar en las elecciones de diputados a Cortes fue atacado por un grupo que le golpeó y disparó varios tiros. (s.f. "Criminal atentado contra D. Jesús Salútegui, Cura Parroco de Abanto", BOE de Vitoria, año 69, 1 de diciembre de 1933, num. 25, págs. 626-627).

La hostilidad contra los sacerdotes no se cifó, empero, a hechos tan violentos ni, tal como habian reflejado los preladados en su correspondencia con el arzobispo de Tarragona, venia exclusivamente del pueblo llano, antes al

forma de proceder en esos momentos; normas que se ceñían a: primera, la no alusión "a ningún régimen, ni a ninguna autoridad política en la iglesia" y a que en el caso de tener que presentar alguna reclamación ante las autoridades

contrario, eran las autoridades civiles, las que, con su empeño en vigilar la actitud del clero, en una postura que distaba mucho del respeto a la libertad de expresión proclamada por la República, más infringían a este distintos castigos. Ejemplo sonero de ello lo tenemos en los siguientes hechos:

Alguna iniciativa de recogida de firmas para solicitar el regreso del obispo de Vitoria dió lugar a la imposición de la correspondiente multa por el gobernador civil; así sucedería en Bilbao, donde un sacerdote y una maestra serían multados por tal razón, ("El Debate", 5 de junio de 1931). También el gobernador civil de Teruel advertiría al obispado que no toleraría que algunos sacerdotes de la capital hicieran "campaña tendenciosa en favor del cardenal SEGURA y de los obispos de Málaga y Vitoria" y conminaría a los fieles que se dedicaban a pedir firmas a domicilio para enviar al gobierno en favor de los tres preladados, para que cesaran en esta actividad o tomaría "severas determinaciones". ("El Sol", 7 de junio de 1931: La información dada por el periódico acababa señalando que "la opinión aplaude la actitud del gobernador,").

Detención, por orden del gobernador, del párroco de Montawarta (Zamora), dando como causa "la campaña que viene haciendo contra la República", ("El Debate", 5 de junio de 1931).

Amonestación a un sacerdote por el gobernador civil de Castellón, debido al sermón de tonos violentos que pronunció en Morella y que había dado lugar a un pequeño alboroto en la población, ("El Sol", 7 de junio de 1931).

Según carta del Dr. JAURITA al cardenal VIDAL I BARRAQUER, aquél fue detenido, al regresar de Lérida el 14 de junio por la guardia civil de Cervara, conducido a su cuartel, y después, a Lérida, pero el gobernador civil de aquella provincia se le reunió a mitad de camino dejándole en libertad "Previas oportunas explicaciones y excusas" (*Església i Estat durant la segona...*, pág. 72, nota 18. Los recopiladores del *Arxiu* indican que la prensa de Barcelona no dió noticia de este hecho).

Detención, a petición del alcalde de Nijar (Almería) de un sacerdote "que se dedicaba a repartir entre los fieles hojas clandestinas injuriando a la República." ("El Sol", 30 de septiembre de 1931).

Detención en Valencia de un sacerdote que en unas conferencias en la iglesia habiaba en contra del régimen. ("El Sol", 17 de diciembre de 1931).

Detención en Castellón de un jesuita por las charlas dadas en Villarreal en unos ejercicios espirituales para caballeros: "Los enemigos de la fe, a pretexto de una conferencia que el indicado Padre dió anteriormente sobre la vida en Rusia, promovieron una campaña de insidias, calumnias y violencias, que dieron por resultado que el Gobernador de Castellón metiera en la cárcel al referido padre, y le denunciara al Juzgado de Instrucción. El señor Juez no

locales se hiciera "con la mesura debida por escrito o verbalmente, pero fuera de la iglesia". haciéndose por conducto del ordinario si se trataba de autoridades

halló motivo alguno para dictar auto de procesamiento, y el Padre fué excarcelado; pero el Gobernador le impuso una multa de 500 pesetas, que los ejercitantes de Villarreal se apresuraron a satisfacer." (s.f. "La Liga Interparroquial en favor de los Santos Ejercicios en nuestra diócesis", BDE de Tortosa, año 73, 15 de diciembre de 1931, núm. 21, págs. 395-396).

Detención del arcipreste de la catedral de Málaga, que permaneció seis días en la cárcel. El boletín eclesástico, de donde hemos tomado esta noticia, no indicaba la causa de esta detención. (s.f. "Crónica diocesana.- La detención del Muy Ilustre, Sr. Arcipreste de nuestra S. Iglesia Catedral", BDE de Málaga, año 65, febrero de 1932, núm. 2, págs. 49-50).

Expulsión del cura párroco y del coadjutor de Terig (Castellón) por el gobernador civil a causa de la petición hecha en ese sentido por cuarenta vecinos y so pretexto de que peligrosaban sus vidas. La decisión dividió y encontró los ánimos del vecindario. ("El Debate", 17 de julio de 1932).

Multa impuesta por el gobernador civil de Cáceres al párroco de Jaraiz y a trece fieles denunciados por el alcalde de la localidad, a raíz de que un grupo de mujeres entonaran cánticos religiosos a la salida de una procesión realizada en el interior del templo, lo que fué considerado por el edil como "una subversiva manifestación de fe religiosa". ("El Debate", 17 de julio de 1932).

Multa impuesta por el gobernador de Zamora a un seminarista, al párroco y al alcalde, que también fué suspendido de su cargo, de Brime de Sog por la realización de mítines con tonos anárquicos y en los que se injurió a la República y al gobierno. ("El Sol", 10 de agosto de 1932).

Imposición de multas por el gobernador de Las Palmas de Gran Canaria a un sacerdote y al párroco de Villa Teror, por el sermón que aquél había dado en el templo atacando al régimen. ("El Sol", 16 de septiembre de 1932).

Multa impuesta por el gobernador de Salamanca a un sacerdote que había contra el régimen en la plática pronunciada en Navaceros. ("El Sol", 20 de septiembre de 1932).

Aviso dado por el gobernador de Valencia al arzobispado para que, ya que "quería prevenir antes que sancionar", diese las órdenes oportunas respecto a la circulación de unas hojas parroquiales clandestinas con conceptos contra el régimen. ("El Sol", 23 de septiembre de 1932).

Imposición de multa al párroco de Muro de Alcoy por el gobernador civil de Alicante, por publicar en la hoja parroquial un artículo agresivo contra el régimen. ("El Sol", 25 de septiembre de 1932).

provinciales o superiores. "Aun las alusiones personales a simples fieles deben evitarse en la predicación. Las advertencias y amonestaciones singulares deben darse en particular"; segunda, guardar las atenciones debidas a las autoridades civiles y procurar con ellas una "digna cordialidad"; tercera, respecto a la posibilidad de ser

Arresto gubernativo del párroco de Soto de Aller (Oviedo) por haber agredido al maestro que obligara a quitar el crucifijo que un sobrino del sacerdote llevó a la escuela. ("El Sol", 13 de noviembre de 1932. La finalización de este arresto había producido, según el rotativo, "gran alegría en el vecindario").

Condena a tres meses de prisión y pago de multa al párroco de Onís, por "desacato a la autoridad y provocación al duelo". El origen de los hechos radicaba en la colecta que había pretendido hacer para atención del culto. Habiéndole llamado el alcalde para amonestarlo, el sacerdote había contestado que "pronto llegaría la contrarrevolución y se verían las caras". Según el Fiscal el sacerdote había invitado al edil a "ir al campo del honor", por lo que este se había querellado contra él. ("El Sol", 26 de noviembre de 1932).

Noticia de la entrega de una nota a la prensa por el gobernador civil de Vitoria en la que daba cuenta del conocimiento que tenía de las campañas contra el régimen que hacían algunos sacerdotes en las iglesias y les conminaba a su suspensión inmediata so pena de la sanción correspondiente. Imposición de multa al párroco de Luvarado por esta causa. ("El Sol", 6 de noviembre de 1932).

Imposición de multa por el gobernador de Zamora al cura de Alcañices "por propalar cantares contra el régimen adaptados a la música del Himno de Riego". ("El Sol", 23 de diciembre de 1932).

Multa impuesta por el gobernador de Burgos a un sacerdote "por manifestarse en términos subversivos" en unos sermones pronunciados en Carcedo, y que se hizo extensiva al párroco por haberlo consentido y al ayuntamiento por no haber dado cuenta; multando también al párroco de Brizalba "por pronunciar en un sermón palabras ofensivas para el régimen". ("El Sol", 31 de diciembre de 1932).

Denuncia presentada ante el gobernador civil de San Sebastián contra un sacerdote que, se decía, enseñaba canciones vascas con algunos versos subversivos a los niños. ("El Sol", 1 de enero de 1933).

Detención del cura de Salinillas por negarse al pago de la multa impuesta por el gobernador civil de Vitoria a consecuencia de una denuncia de que al leer la pastoral sobre el proyecto de ley de Congregaciones religiosas, había hecho "un comentario desfavorable para la República". ("El Sol", 7 de enero de 1933).

Imposición de una multa por el gobernador de Orense a un sacerdote por pronunciar el día de Viernes Santo en la catedral "palabras irrespetuosas para el Gobierno de la nación". ("El Sol", 21 de abril de 1933).

elegidos para cargos publicos debian recordar la necesidad de previa autorizaci3n del obispo, y cuarta, les prohibia "concurrir a mítines políticos o electorales, aun cuando sean de tendencias sanas y honestas; e igualmente de

Multa impuesta por el gobernador civil de Tarragona al párroco de Prat del Comte por haber celebrado una procesi3n sin autorizaci3n. ("El Sol", 27 de abril de 1933).

Imposici3n de multa por el gobernador civil de Granada al párroco de Dural, tambi3n por la celebraci3n de una procesi3n sin previa autorizaci3n. El párroco, tras la interposici3n de escritos y recursos pidiendo la condonaci3n sin conseguirla, habia intentado evadir la acci3n gubernativa, siendo detenido por la policia en Madrid y liberado al abonar un hermano suyo la multa. ("El Sol", 24 de mayo de 1933).

Multa impuesta por el gobernador de Bilbao a un sacerdote "que despu3s de alterar el orden trat3 de arengar a las masas contra la fuerza p3blica... con motivo de las manifestaciones subversivas de los elementos nacionalistas". ("El Sol", 30 y 31 de mayo de 1933).

Imposici3n de multa por el gobernador civil de Zamora al párroco de Castrogonzalo "por hacer manifestaciones politicas desde el p3lpito". ("El Sol", 5 de julio de 1933).

Multa impuesta por el gobernador civil de Tarragona al párroco de Caseras "por una campaa injuriosa contra la Rep3blica y contra sus gobernantes desde el p3lpito". ("El Sol", 14 de julio de 1933).

Detenci3n del párroco de Beniarj3 por negarse a pagar la multa impuesta por el gobernador civil de Valencia "por dirigir ataques a la Rep3blica en el curso de una plática dirigida a ni os que tomaron la primera comuni3n" ("El Sol", 15 de julio de 1933).

Detenci3n, por orden judicial, del párroco de Nuffomoral (Cáceres) al haberse hallado en la redacci3n del semanario catolico "Faro de Extremadura" documentos que le comprometian con motivo "de la publicaci3n de unas hojas de car3cter fascista que han circulado clandestinamente por esta ciudad [Plasencia] en las que se excitaba a ir contra la casa del Pueblo al frente de un numeroso grupo de hombres armados." ("El Sol", 8 de agosto de 1933).

Denuncia formulada ante el juzgado de instrucci3n por el alcalde de Vara del Rey (Cuenca) por la agresi3n que el cura de la localidad habia hecho a unos trilladores porque cantaban el himno nacional, indicando los vecinos que no era la primera vez que se pronunciaba contra el r3gimen y manifestando su descontento por la inhibici3n del gobernador civil. ("El Sol", 25 de agosto de 1933).

Noticia de la propaganda politica, con ataques a la Rep3blica "mientras los servidores de la iglesia repartian candidaturas de derecha", efectuada en Novelda (Alicante) por un can3nigo de Valencia, por lo que los fieles se

celebrar o admitir reuniones políticas o electorales en sus casas. " (402)

También en el mes de junio el obispo de Oviedo, Dr. Juan Bautista LUIS Y PÉREZ, suscribiría un documento, dirigida en este caso, como había hecho SEGURA y como harían

indignaron y el predicador hubo de huir. A causa de estos hechos el gobernador civil de Alicante ordenaría la detención del sacerdote. ("El Sol", 14 de noviembre de 1933).

Para finalizar esta referencia, y como contraste de toda esta relación de presuntas o verdaderas actuaciones del clero contra la República y la consiguiente reacción de sus autoridades, queremos concluir con la descripción dada por "El Sol" a mediados de 1931 de unos sermones pronunciados por los dominicos del convento de Calanda (Teruel) con motivo de una novena y que no dejan de ser indicio, aunque este tipo de noticia -en este caso con las pintoresquistas expresiones de la época- no proliferara en la prensa del periodo, de la división existente en el clero español:

"Sermones republicanos.- Los dominicos de Calanda atacan a los Gobiernos de la Monarquía y a los elementos monárquicos.- El público se retiró de la iglesia y hubo que suspender la novena.- ...Al tiempo concurrían la totalidad de los elementos católicos del pueblo y numerosas mujeres calificadas de 'beatas' intransigentes por sus convicciones. Es preciso consignar que los frailes mencionados eran bien vistos en Calanda, y nadie había opuesto reparo alguno a su estancia en la localidad.- Con motivo de los sermones pronunciados... han venido atacando a los Gobiernos de la Monarquía y al propio ex Monarca, y aludiendo a los desertos de aquellos, causantes del desquiciamiento nacional. Los ataques llegaron a ser muy duros, hasta el punto de señalar a los atacados como incitadores de la quema de conventos.- También han combatido a los caciques de los pueblos, que han venido abusando de su dominio, considerando como esclavos a los humildes, y han atacado asimismo a los capitalistas, diciendo de ellos que cobarde y antipatrióticamente han abandonado España, llevándose sus capitales.- En cambio ensalzaron al Gobierno de la República... explicando que República es orden y es respeto a todo, así como es justicia, desconocida por los Gobiernos de un régimen que ha desaparecido de España para siempre. Agregaron, finalmente, que los elementos monárquicos que no sienten amor al suelo patrio son los culpables de la desvalorización de la peseta, y exhortaron, por último, a los ricos a que eviten el odio de los pobres, atendiendo a las necesidades que surren, especialmente las clases trabajadoras.- Ante esta actitud de los religiosos en el púlpito, las beatas y elementos clericales se retiraron de la iglesia... Las clases bajas ven con simpatía la campaña de los dominicos y agradecen la gallarda actitud que han adoptado..." ("El Sol", 22 de julio de 1931).

(402) 6 de junio de 1931, "Exhortación sobre la fortaleza y prudencia sacerdotales en los momentos difíciles del ministerio pastoral", BOE de Avila, año 42, 8 de junio de 1931, núm. 6, págs. 219-225.

otros prelados en el inicio del periodo estival, a los alumnos del seminario de su diócesis, a fin de estimularlos en la permanencia e intensificación de su vida religiosa, en unas vacaciones "mas largas que las ordinarias" por "los acontecimientos bien conocidos", que habian venido a turbar sus espíritus. Destaca en sus irases, de esencial contenido religioso, el juicio sobre la catolicidad de la sociedad española, y, así, les señalaba que iban a dirigirse ahora hacia un mundo que habia reducido su cristianismo "a una repetición mecánica de actos que son en ellos formas sin contenido...", razón por la que "en nuestra patria sean posibles cosas que en estos momentos llenan nuestra alma de dolor."⁴⁰³

La pastoral suscrita por las mismas fechas por el Dr. Isidro GOMA se limitaba a glosar las mejoras efectuadas en el seminario y a constatar "la posibilidad de que las actuales circunstancias influyan en el sentido de baja en la matrícula del próximo curso", no obstante señalar que muchos padres y madres de los seminaristas en los momentos de mayor peligro les habian estimulado a perseverar en su vocación; junto a ello le apesadumbraba "el que alguien que debia dar alientos a las familias les haya inducido a no llevar sus hijos al Seminario, o a quitarlos de el, a pretexto de que la carrera se pone mal ", cuestión esta que no debia influir en el futuro sacerdote, cuyos designios eran mas elevados que los de realizar una "carrera", por lo que exhortaba a todos cuantos tuvieran verdadera vocación a continuar firmes en ella."⁴⁰⁴

(403) 15 de junio de 1931, "A los alumnos de nuestro Seminario Conciliar", BOE de Oviedo, año 67, 15 de junio de 1931, núm. 12, págs. 183-187.

(404) 14 de junio de 1931, "Exhortación pastoral sobre vacaciones de los seminaristas", BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de junio de 1931, núm. 685, págs. 433-438.

Nuevamente suscribiría el Dr. GOMA otra pastoral para el clero, en esta ocasión en el mes de julio y relativa a los ejercicios espirituales de los sacerdotes de sus diócesis, pastoral en la que destaca el pesimismo con el que observaba la situación religiosa española en contraste con otras noticias de los distintos boletines eclesiásticos que reflejaban el fervor reinante en los actos y manifestaciones religiosas⁽⁴⁰⁵⁾. Indicaba así el obispo:

"Los momentos son difíciles. En pocos meses hemos visto bajar bruscamente el termómetro indicador de la vida espiritual en nuestros pueblos. Las noticias que nos dan nuestros venerables párrocos sobre la vida religiosa de sus feligresías son poco satisfactorias ... el movimiento general ha sido de descenso y enfriamiento."

La responsabilidad de esta situación era clara para el obispo, por cuanto este enfriamiento religioso era causa directa de las realidades traídas por la República que enumeraba seguidamente:

"Los ataques a la Iglesia y a sus cosas, a su doctrina, a sus ministros, a su culto, ora por medio de leyes impías, que a lo menos han tenido la eficacia de descotizar en la mente del pueblo los altos valores de nuestra religión; ora por medio de la prensa sectaria, que ha utilizado todos los recursos de la publicidad, el artículo tendencioso, la caricatura, el chiste grosero, la imputación calumniosa, la mentira histórica; ora por verdaderos atropellos cometidos por autoridades desconocedoras de su oficio, han envalentonado a los malos, han acobardado a otros menos fervorosos y han hecho que hasta los mejores debieran extremar su prudencia y esperar en el rincón de su casa a que pase la tormenta de la impiedad y laicismo que padecemos."

(405) Basta contrastar estas frases con las noticias sobre procesiones a que nos hemos referido en la nota 88 de este capítulo.

Esta situación había traído al propio obispo y a sus sacerdotes "contradicciones desacostumbradas", estando todos "amargados por el daño que el enemigo ha causado en nuestro campo". Contra ello sólo cabía la sobrenaturalidad de su fe, que el Dr. GOMÁ describía con el tradicionalismo histórico a que sus escritos nos tienen acostumbrados, y al que añadía una dura crítica sobre el contenido del proyecto de la nueva constitución.

"Nunca, por otra parte, nos es más necesario el espíritu sobrenatural, verdadera alma de nuestro apostolado, que en estos tiempos iniaustos en el que el viejo contenido de nuestra tradición, de nuestra historia y de nuestra grandeza, todo empapado y vivificado por el sobrenaturalismo cristiano, quiere substituirse, desde las esteras donde se forman las leyes hasta los últimos derivados de su aplicación a la vida social, por el frío laicismo que se ha levantado como bandera de la nueva constitución de nuestra patria y que no significa más que la reversión total al crudo paganismo."¹⁴⁰⁶

Pero no se contentaría el Dr. GOMÁ con reflejar en esta forma su parecer cara al clero de su diócesis y, así, a los pocos días volvería a dirigirle una nueva y larga pastoral reiterando más específicamente la actitud que los sacerdotes de sus diócesis debían mantener en las nuevas circunstancias. El elegir como vehículo de comunicación, por las razones que ya hemos expuesto al hablar de la circular del Dr. ELJO Y GARAY, el latín, le daría una libertad de expresión cara a su clero, tanto sobre la actuación de este como sobre la cosa pública, que difícilmente hubiera utilizado en un texto escrito en castellano. Señalaría, así, que

"...continuamente las miradas de todos suelen estar atentas en nosotros, para ver algo revestido de mal o alguna manifestación del mal; pero ahora,

(406) 11 de julio de 1931, "Exhortación pastoral sobre Ejercicios espirituales de los señores sacerdotes en ambas Diócesis", BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de julio de 1931, núm. 687, págs. 536-542.

estos días infraustos, los hombres perversos ponen su esfuerzo en difamar nuestro nombre y nuestra fama con anécdotas indignas, con calumnias, con la exageración de asuntos insignificantes, oralmente y en la prensa, en escritos y en imágenes, aparte de eso que llaman caricaturas, y con todo ello se dirigen contra hechos sagrados o personas particulares, contra toda la jerarquía eclesiástica, las instituciones monásticas, se esfuerzan en arruinar la vida religiosa o las funciones sagradas."

Reiterada esta descripción, en base a la cual, el obispo recomendaba a sus sacerdotes la ejemplaridad de su conducta, pasaba a recomendarles -con lo que parece un reconocimiento del propio mal que el estamento eclesiástico podía haber hecho en la sociedad, pero que, en realidad, quedaba circunscrito a la tópica frase humilde-, que fueran "amantes de la soledad" y reprimieran "la tendencia a divagar", ya que "Los hombres mundanos sienten aversión hacia nosotros, porque casi la mayor parte de los males que padece la sociedad, los introdujimos con nuestra acción." y, así, "muchos creen que los clérigos llevan una vida inocente y perezosa y que son casi zanganos que viven del trabajo y riquezas ajenas..."

Pero más anonadaba el prelado sobre la actuación del sacerdote en aquellos difíciles momentos haciendo una reconvencción sobre su posible "paso al enemigo" que, por no haberla visto reflejada en ningún otro miembro de la jerarquía, transcribimos íntegramente a continuación:

"Cuidaros de no mezclaros en las raciones políticas o de obrar a gusto de los políticos para serles gratos, o, lo que sería más abominable, para descubrirles algo referente a nuestro régimen y vida eclesiástica y lo que debe ser ocultado con prudente silencio, aceptando de ellos algún favor o provecho. Entonces no seréis dignos del nombre eclesiástico, puesto que un eclesiástico debe tener en el corazón todo lo que se refiere y concierne a la Santa Iglesia, por el contrario mostrareis la mancha de la traición, porque habreis dirigido algo santo a los perros, y a sus

mordiscos, maquinaciones, poder, entregareis algo de lo que de algún modo atañe a la Santa Iglesia. Pues sabéis cuán hostiles son los enemigos que a menudo se visten de piel de cordero, y cuánto trabajan contra nosotros, nuestra doctrina, bienes, personas para ponernos en peores condiciones."

Y esto era así desde todos los ángulos, pues, añadía el obispo, comentando nuevamente los hechos de la República con los duros calificativos que en él eran habituales:

"...con qué ardor, con qué ímpetu los hombres seductores y perversos dedicados a las habladurías, como dice el Apostol, se esfuerzan con todo su corazón y trabajo en erradicar de las mentes de los hombres la fe cristiana; en , si no extirpar el culto a Dios, al menos, igualarlo al culto de falsas religiones; arrebatando de manos de la Iglesia la educación de la juventud; quitando de las escuelas infantiles la imagen del Santísimo Crucifijo; disipando a ciegas el depósito de la tradición cristiana, recibido por sus antepasados; derribando con leyes, con escritos, con el abuso de autoridad todas nuestras cosas. En efecto, este celo es verdaderamente demoníaco por su falta contra Dios, contra las almas encomendadas a nosotros."

Frente a ello los sacerdotes debían actuar "cauta y valerosamente", conservando la doctrina y

"...las costumbres cristianas y laudables de los pueblos, el tesoro acumulado para la vida religiosa por nuestros antepasados, transmitido y confiado diligentemente a nosotros a través de los siglos, de manera que, incluso en la adversidad de estos tiempos, por nuestra desidia no perezca nada de lo que hemos recibido de nuestros padres.

...

"Cuando las antiguas fábulas, para hablar según el Apostol, las novedades profanas, las doctrinas impías, las falsísimas narraciones, las disciplinas o teorías de los ignorantes adulando al pueblo son extendidas por todas las partes, a través de diarios y efemerides, en coloquios privados, en sermones de oradores que reblanecen los oídos del vulgo, conviene que levantemos la voz y con predicación ininterrumpida conservar

incólume el depósito de la fe en los corazones de los fieles, y custodiarlos contra los errores de las serpientes sabia y cautamente. ¡No seáis merecedores del nombre de perromundo!"

Para lograr tal proposito pasaba a definir el prelado cual debia ser la actitud concreta de los sacerdotes, que, al parecer y contrariamente a la que el mismo seguia, debian situarse en una especie de isla espiritual y aislada respecto a su religesia, ya que se cenía esencialmente a que sus charlas al pueblo fueran breves, claras y vividas, "con un lenguaje adaptado a la capacidad de todos". Sobre todo en ellas no debia hacerse alusion alguna "a los asuntos politicos, a las personas, a las rivalidades y hechos locales". Ni siquiera en la forma de hablar debian dar los sacerdotes motivos de duda, sospecha o falsas interpretaciones. Principalmente, con una razon que no llega a entenderse bien, no estaba permitido "bajo ningun pretexto, entremezclar la catequesis de los adultos y de los niños", en base a que "el enemigo se esfuerza en laizar, como dicen, a la juventud, principalmente a los niños", por lo que era preciso no ahorrar ningun esfuerzo para "frustar las leyes impias y reservar a Dios y a la iglesia las almas de los jovenes y de los niños."

Junto a ello daba el obispo diversos consejos de orden sacerdotal sobre el espiritu paternal con que debian administrar los sacramentos, insistiendo en la necesidad de tener "destreza en los consejos, suavidad y benevolencia en la conversacion con el pueblo encomendado a vosotros, prudencia y ductilidad con severidad al tratar con aquellos que tienen mucho poder en la autoridad civil, paciente y atnegada caridad para apaciguar las disensiones en caso de que existan", todo lo cual deberian hacer con "aquella ponderacion y equilibrio por los que sabemos estimar lo que se ha de decir o se ha de callar, lo que se ha de hacer o no y de que manera, principalmente en las circunstancias

concomitantes que suelen crearse para nosotros a causa del cambio de los asuntos públicos."

Según pormenorizaba a continuación, daba el prelado estos consejos en base a las denuncias llegadas hasta él tanto contra actitudes de sacerdotes como de estos quejándose del trato recibido de parte de las autoridades públicas:

"... con frecuencia nos llegan requerimientos o bien de aquellos a quienes se ha confiado el gobierno civil del pueblo sobre defectos o excesos de los sacerdotes cometidos en un sermón o en algún acto; o, lo que ocurre más frecuentemente, sobre abusos con las cosas, funciones o personas sagradas por parte de los magistrados civiles. Las molestias y los esfuerzos que debemos soportar de una y otra parte, no son leves."

Por esta razón insistía el obispo en la actitud que debían mantener los sacerdotes:

"Os advertimos, hermanos, que realiceis con gran cautela todo lo que de alguna manera se relaciona con los asuntos civiles para que no se dé ocasión, a quienes dirigen dichos asuntos, a levantar querelias o litigios de cualquier tipo. Si a causa de las leyes introducidas recientemente sobre asuntos que son de jurisdicción eclesiástica, cementerios, culto, educación cristiana de los niños, etc. se origina algún problema, reveladlo rápidamente a Nos o a Nuestra Curia, conforme a lo prescrito por Nos por medio de circulares enviadas a todos vosotros a través de Vicarios foráneos."

"Incluso en las charlas privadas tened el máximo cuidado, principalmente al tratar de política; pues hay muchos a quienes parece encomendado el oficio de escuchar a los eclesiásticos en la conversación; por lo que han surgido diferentes problemas con los magistrados seculares."

Estas ironicas frases daban paso a un escalón más en las exigencias del obispo respecto a su clero, al que

prohibiría incluso la asistencia a los conciliabulos de las religiosas en donde, al parecer, se trataban asuntos relacionados con la cosa pública:

"Por esta misma razón de prudencia, prohibimos totalmente todo acceso a las faginas y charlas monacales para que, bajo el pretexto de la vigilancia y la protección no caigais en aquellas que tratan sobre los acontecimientos presentes y futuros en el orden civil o social. Por la intemperancia y la indiscreción en este asunto, hemos tenido molestias no pequeñas. Para el cuidado y tutela de las santas vírgenes hay hombres prudentes destinados por Nos que, según las circunstancias de las cosas y de los lugares, por su prudencia y la licencia dada por Nos precaverán cualquier cosa que les parezca oportuna."

Y, tras recomendarles la modestia en el obrar y la abstención de asistir a ciertos espectáculos públicos, pasaría a tratar de la licencia de algunos sacerdotes que se permitían no vestir el hábito talar. Aunque, indicaba, no pertenecían a sus diócesis, las palabras del obispo son reveladoras de que por parte del clero seguía innovándose esta costumbre, que no respondía únicamente, como de la circular del obispo de Madrid-Alcalá podía deducirse, a una medida de prudencia ante las imprevistas posibilidades del cambio de régimen. La postura del Dr. GOMA en esta materia era extremadamente tradicional y estricta, llegando a prohibir a los que tal hicieran el desempeño de su ministerio sacerdotal.

"Además se nos ha comunicado que algunos sacerdotes en nuestro territorio, aunque no de los nuestros, han abandonado el hábito talar para ponerse el traje laico. Que cada uno prevenga sobre su seguridad, si las cosas llegan a tal punto que exista verdadero peligro. Sin embargo, si los asuntos políticos, en el orden civil o social, no cambian más, prohibimos llevar públicamente el traje laico, particularmente en el territorio de Nuestra jurisdicción. Si alguien, como ya ha ocurrido, viene de otra parte a alguna de nuestras iglesias, bien para consagrar, bien

para predicar, sin vestir el hábito talar, prevenimos a los rectores de las iglesias que no les permitan ejercer los ministerios sagrados."

Concluía el obispo su pastoral recomendando a sus sacerdotes la lucha valerosa en el espíritu de la Iglesia, lucha a la que los exhortaba aludiendo -contrariamente a lo que de una forma razonable acababa de hacer al enjuiciar la situación de la cosa pública respecto a la Iglesia- a la gravedad de las horas futuras, "Ved que los tiempos son malos, y se prevén peores los venideros", por esta razón los sacerdotes debían orar sin descanso, oraciones que el obispo recomendaba precisamente para impetrar el cambio de actitud del nuevo régimen, con una dureza tal que probablemente no habría utilizado las mismas frases si el texto de esta pastoral hubiera sido escrito en castellano y, por tanto, accesible al gran público:

"...rogar a Dios continuamente con oraciones para que no permita que los hombres perversos, enemigos de Dios y de las cosas santas, mantengan largo tiempo el timón de nuestro católico pueblo; o Quien doblega las voluntades rebeldes con su mandato, los enmienda y no les permita tocar con su impía audacia la doctrina católica, su culto, costumbres, instituciones sacras, cosas o personas." (405)

405 23 de julio de 1931, "Pastoralia monita ad Venerabilem clerum saecularem utriusque Dioecesis, temporum circumstantiis accommodata", BOE de Tarazona y Tudela, año 89, 31 de julio de 1931, núm. 688, págs. 556-567. En carta al cardenal VIDAL de 16 de agosto, el Dr. GÓMEZ le comentaría: "No he puesto en el último número del Boletín una *Pastoralia monita* a los sacerdotes. El escándalo dado recientemente y algunos chisnoazos sueltos me han puesto miedo de lo que pueda ocurrir en la clase sacerdotal, pocos a Dios gracias, según el sesgo que tomen las cosas". *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pág. 219. Sobre el comentario del obispo señalan BATLLORI y ARSELOA que podía tratarse de la actitud de izquierda de algunos sacerdotes disautados a las Cortes constituyentes, *Ibidem*, nota 4. Ver el texto de la pastoral en latín en el apéndice núm. 38.

Muy distinto al contenido de esta pastoral seria la suscrita el primer viernes de julio de 1931 por el Dr. GONZALEZ GARCIA, obispo de Malaga, cuyo proposito, de acuerdo con el espiritu de este prelado de una sencilla religiosidad tradicional, a juzgar por sus escritos, lejos de encauzar la actividad de su clero ante las nuevas circunstancias politicas era precisamente el de confortarlo tras la ola de incendios sacrilegos suirida en la diocesis, animandoe a realizar con mayor empeno su runcion sacerdotal y, todo ello, sin alusion alguna al nuevo regimen, aunque si, indirectamente, a quienes habian realizado los incendios.

Comenzaba asi el prelado refiriéndose a ese "huracan de odio y devastacion" que habia desolado, material y espiritualmente, la provincia, pero, que, si habia separado a muchos sacerdotes, y a el mismo, de sus fieles, habia contribuido, como contraste, a estrechar mas los lazos entre ellos, como se deducia de los mensajes de cariño y adhesión que le llegaban desde todos los puntos de Malaga, las visitas que recibia y aun las ofertas de ayuda material.

Por todo ello el prelado daba las gracias a Dios al "haber sido elegido para la persecucion, el incendio y el despojo por su Santo Nombre", en el que radicaba el gran consuelo y la esperanza del sacerdocio, de ahí que exclamara, aludiendo a sus perseguidores "¡Somos y seremos Sacerdotes a favor de ellos, con ellos y a pesar de ellos!", pues su runcion sacerdotal podia realizarse "con confesionarios y sin ellos... con pulpitos y sin ellos... sobre altares ricos o bajo bóvedas artisticas, como sobre un montón de piedras en el campo...". Si con ese espiritu proseguian en su ministerio, les aseguraba que "La diocesis de Malaga, la desolada y arruinada diocesis de Malaga sera

en plazo no largo la diócesis más rica y floreciente en paz de Cristo, en obras de Dios y en triunfos insospechados de la Iglesia y de las almas."...

Una postura intermedia entre las dos acabadas de analizar sería la que se desprende de la pastoral suscrita por estas fechas por el obispo de Palencia, Dr. FARRADO GARCÍA y dirigida a los párrocos de su diócesis con el fin de orientarles en la labor que deberían realizar con los alumnos del seminario durante las vacaciones. Ni tan suavemente religiosa como la del obispo de Málaga, ni tan

(409) Jueves, viernes de julio de 1931, "Admonición Pastoral de nuestro Rvmo. Prelado.- A los sacerdotes", BOE de Málaga año 64, 15 de julio de 1931, núm. 8, págs. 205-208. Entre los boletines eclesiásticos consultados hemos encontrado reproducida esta pastoral en el de la diócesis de Mondoñedo, ("Interesante admonición pastoral del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de Málaga al Clero de su Diócesis", BOE de Mondoñedo, año 74, 5 de agosto de 1931, núm. 15, págs. 130-131). En el número siguiente del boletín eclesiástico de Málaga insertaría el Dr. GONZÁLEZ, con el resto de crónicas y sueltos a que ya nos hemos referido al tratar de los incendios de mayo (ver las notas 150 y 154), una pastoral también dirigida a su clero, cuyo texto, redactado hacía años, había encontrado entre los "restos de papeles incendiados" que le habían llevado a Gibraltar. Considerando el prelado que sus palabras seguían siendo de rigurosa actualidad, exhortaba a sus sacerdotes a confiar en su ministerio, único que podía salvar el abismo existente entre los ricos y los pobres. Los sacerdotes -decía- están "perseguidos, instigados en estas horas de convulsiones horribles y de locuras sin ejemplo por la tentación del mal espíritu de la confusión o del pesimismo, que los empuja a hacer lo que no deben, o los ata para que no hagan lo que deben." No era a soluciones económicas o políticas a las que los sacerdotes debían recurrir para "salvar al mundo que aprete que agoniza... esos dos bandos de ricos y de pobres en que se divide el mundo y que ni os miran, ni os oyen, entre otras razones, porque no les queda tiempo más que para odiarse y temerse alternativamente... no irán a la reconciliación y al abrazo de hermanos para lo que el Padre celestial los crió, ni por la técnica, ni por la economía, ni por la fuerza." Algo de eso podría ayudar, "sino es que, como a las veces ocurre, entorpece y dificulta; pero ¿llevar hasta el fin?" La experiencia de más de un siglo evidenciaba que, a pesar de lo mucho que se había progresado en esos ámbitos, el abismo se ahondaba y ensanchaba cada vez más.

Para remediar la situación descrita, concluía el prelado, estaba precisamente el ministerio sacerdotal, el "mejor preparado para la distribución equitativa y armonía de los elementos que han de traer la solución ansiada, la Justicia y la Caridad". Por ello el sacerdote, "sin desdeñar otros medios buenos", sólo había de confiar en su ministerio y ello aunque no se le oyera o se le dificultara el camino. (S.f., "De entre los escombros", BOE de Málaga, año 64, 15 de agosto de 1931, núm. 9, págs. 355-359).

dura respecto al clero y a la política como la del de Tarazona, esta carta no dejaba de contener una personal visión respecto a los cambios en las vocaciones sacerdotales que el nuevo régimen podía implicar. Así, al aludir a la tutela y consejo que los parrocos debían practicar cerca de los seminaristas, no dejaba de señalar que a los conocidos peligros de las vacaciones, se sumaban en ese año otros específicos dada "la excepcional condición de los momentos actuales", ya que

"...la animosidad que se observa contra la Iglesia -y que de algunos meses a esta parte va incrementando- exacerbada y sostenida por campañas tendenciosas de prensa impía que se alimenta de injurias y de calumnias; la perspectiva, no infundada, de una vida sacerdotal más abundante en trabajos, privaciones y sacrificios; la presunción más imaginaria que real, y, en todo caso, exagerada, de insuperables estrecheces económicas, han de sembrar, seguramente, entre los seminaristas pusilánimes, y sobre todo entre muchos de sus deudos y familiares, desalientos y recelos."

Sobre estos nuevos enemigos de las vocaciones eclesísticas era necesario "prevenirse y luchar" y, así, los seminaristas que sintieran "que ahora más que nunca les necesita la Iglesia, para bien y provecho de las almas, de aquellas singularmente que con tanta saña la persiguen, que a todo trance las quieren salvar", debían procurar precaverse y ponerse a salvo de los peligros, labor en la que debían colaborar, ayudándoles, los parrocos, a fin de "sacar a flote a muchos que se encuentran en grave peligro de naufragar".⁽⁴¹⁰⁾

(410) s.f. "Pastoral.- A los señores Párrocos, para sus Seminaristas", BOE de Palencia, año 81, 15 de Julio de 1931, núm. 15, págs. 471-473.

La situación así entendida y descrita por los prelados respecto a los trabajos y sinsabores más abundantes o excepcionales que, como consecuencia de la llegada de la República, iban a sufrir los sacerdotes, sería causa determinante de la creación, por parte del clero, en algunas diócesis, de un órgano específico para su defensa. Así, al menos, se deduce del sueldo publicado en el

Para finalizar esta referencia a las relaciones de la jerarquía eclesiástica con su clero en la primera andadura de la República, queremos aludir a la curiosa circular -curiosa por su rareza, al dar cuenta de un hecho que no hemos visto reflejado en otras diócesis-, suscrita por el arzobispo de Santiago de Compostela a finales de noviembre.

Aludía la circular indicada al caso dado en algunas parroquias de la archidiócesis de que los feligreses se opusieran "violentamente, sin razones atendibles que justifiquen tal actitud, a recibir o consentir al Párroco que les había sido enviado por la superioridad en uso de su legítimo e indiscutible derecho". Aunque estos casos, seguía indicando el arzobispo habían sido "muy raros", dado el escándalo que podía producir entre los fieles "y el mal ejemplo a las parroquias vecinas", no quería dejar de amonestar a los que se oponían a sus mandatos; amonestación que, aunque inculpaba los fieles de la actitud señalada, iba, en realidad, dirigida a los sacerdotes, lo que hace suponer un distinto trasfondo de los hechos, y, así, les recordaba las penas canónicas en que podían incurrir por estos hechos.

boletín eclesiástico de Pamplona y por el que se comunicaba a los sacerdotes, que, "por indicaciones reiteradas de muchos sacerdotes regulares y seculares, y por exigencia deplorable de la realidad" se había procedido a la reorganización de la "Liga diocesana de defensa del Clero", organismo "de indiscutible necesidad para defender la dignidad sacerdotal" y que tendría como fin "reivindicar ante los tribunales civiles el honor de las instituciones eclesiásticas y de los sacerdotes contra las injurias y calumnias, que contra los mismos se propaguen, principalmente por medio de la Prensa". Para lograr este propósito invitaba a todos los eclesiásticos a dar su nombre a la institución, que, por medio de los abogados y procuradores nombrados al efecto, se encargaría, mediante la tramitación de las oportunas querrelas, de obtener las correspondientes sentencias condenatorias "en cuantos casos se refieran a sacerdotes inscritos en la Liga, a petición del interesado o a instituciones eclesiásticas por acuerdo de la Directiva de la Liga." (s.f., "La Liga diocesana de defensa del Clero", BDE de Pamplona, año 70, 1 de septiembre de 1931, núm. 1716, págs. 372-373). Hay que advertir, no obstante, que no hemos encontrado en el boletín eclesiástico de Pamplona ninguna otra noticia relativa a esta "Liga", ni en otros boletines eclesiásticos consultados referencia alguna a constitución de organismos semejantes en otras diócesis.

Tras indicar éstas, advertía de

"... la importancia que hoy más que nunca tiene para el bien de la religión católica el que todos los fieles, y muy especialmente los sacerdotes, estén íntimamente unidos y compenetrados con sus Ordinarios, y acaten con filial adhesión las legítimas disposiciones de éstos."

Por ello esperaba que no volvería a repetirse ninguno de los casos que motivaban la circular, "ni Nos veremos obligados a aplicar a ninguno de nuestros sacerdotes las sanciones canónicas antes citadas..."⁽⁴¹¹⁾

(411) 25 de noviembre de 1931, "Circular", BOE de Santiago, año 70, 27 de noviembre de 1931, fols. 266A, págs. 474-475.

11. La restante actuación generica de la jerarquia en la andadura inicial de la Republica: obispos de Barcelona, Madrid-Alcalá y Sevilla.

Tratadas las dos cuestiones especificas, que, por su individualidad, acabamos de comentar aisladamente, queremos reseñar, para acabar con el tratamiento de la actitud de la jerarquia durante 1931, el resto de los pronunciamientos dados por esta en el primer año de la República y que, por su caracter generico, no eran subsumibles en ninguno de los apartados comentados hasta ahora.

Volviendo, pues, la vista a los meses centrales del año señalaremos que el 19 de julio suscribiera el obispo de Barcelona, Dr. IRURITA ALMANDOZ, una pastoral comentando con negros tintes la situacion general de España y aludiendo, por ella, a la necesidad de una acendrada religiosidad en los fieles, religiosidad que, entre otros matices, prevenia a las mujeres contra "la tentación de independencia", aparte, claro es, contra la inmodestia, vanidad, etc. etc. invitandolas a ser instrumentos de Dios para la salvación de los hombres.

Mas dejando a un lado estos detalles que no pueden dejar de destacarse en un analisis de la postura de la jerarquia de la época, indicaremos que la pastoral contenia, como tantas otras hasta aqui vistas, una visión de la

realidad española que se basaba mas en la necesidad de defensa de la Iglesia, que en una actitud positiva de beligerancia nacida de la fe. Asi, sin dejar de aludir al "glorioso destierro" de los obispos que residian fuera de España, el escrito del Dr. IRURITA era principalmente una critica de las instituciones republicanas y una llamada a la lucha "mediante la accion legal, la oracion, y "las buenas costumbres" de los creyentes- contra ellas. Bastan como muestra los siguientes parrafos en linea con las frase mas radicales que puedan encontrarse en los escritos del Dr. GOMA:

"...conviene que se sepa, conviene que todo el mundo sepa que padecemos por la causa de Jesucristo. Un vendaval infernal recorre el mundo produciendo aca y alla tempestades de fuego y de cieno; algunas raiaas violentas han llegado a tierras españolas, y ya habeis visto los estragos que han causado: han avivado las llamas sacrilegas que han devorado iglesias y conventos, han arrancado de sus Sedes a santos Prelados, llevandolos al destierro. Suirimos persecucion religiosa; y son algunas autoridades las que mas se señalan por sus ataques a la Religion Catolica, empleando toda clase de armas, desde las disposiciones sectarias hasta el desprecio volteriano; hasta alardear de no haber figurado nunca en las filas de la Iglesia Catolica. En vano fingen razones de orden publico para justificar ciertas medidas; en vano se llega a la injuria personal, apreciando injustamente en la conducta de algunos Prelados ciertas imprudencias, ciertos defectos de caracter. No, no es eso, la Historia se repite... los catolicos del siglo XX padecemos tambien por Jesucristo, no por ser enemigos del progreso o del regimen o de la libertad, como torpemente se nos calumnia. Esto, lo repetimos, conviene que se sepa y se tenga muy en cuenta y que no se olvide, primero, porque es conveniente conocer las intenciones y movimientos del enemigo, para organizar la defensa y el contra-ataque, y segundo para despedir muy lejos de nosotros todo temor vano, toda cobardia y hasta el menor asomo de tristeza y desaliento."

El inicio de tal "contra-ataque" era para el prelado motivo de consuelo y de esperanza y lo veía, así reflejado, en los movimientos de protesta fomentados por la "Junta Diocesana de Acción Católica y otros organismos", centrados en las colgaduras colocadas en los balcones el día del "Corpus" o en la "nota culminante de esos centenares de miles de firmas, pidiendo al Gobierno que no sean expulsadas las Ordenes Religiosas."

Pero el obispo esperaba que no pararía aquí el movimiento de los católicos, que debía culminar en una "organización perfecta, para contrarrestar valientemente los ataques de la impiedad, hasta conseguir el triunfo definitivo de la causa de Jesucristo en nuestra amada Patria."

Junto a los consuelos que el obispo acababa de indicar estaban los de la prensa católica, "en la cual plumas de oro vienen defendiendo con bizarría singular los ideales cristianos contra las blasfemias, falsedades y procaces osadías de la parte contraria"; y, junto a estos, los de los actos de públicas plegarias "de desagravios y reparación" celebrados en toda la diócesis. Al ser esta acción la más positiva establecía determinadas preces en todas las parroquias para "el perdón de nuestros pecados, la perseverancia en el bien y la salvación de nuestra Patria". (412)

(412) 19 de julio de 1931, "Exhortación pastoral de S.E. Reverendísimo", BGE de Barcelona, año 74, 24 de julio de 1931, núm 14, págs. 445-458.

En relación con las ideas del Dr. IRURITA, quizá sea oportuno señalar el comentario del cardenal VIDAL al nuncio en la carta, ya reseñada, del 27 de agosto siguiente: "Me dicen que el Sr. Obispo de Barcelona ha regresado de su país un poco belicoso; no es de extrañar, dado su temperamento y el del Secretario de Cámara, casi condiscípulo de Segura; como es bueno y celoso, confío se podrán evitar estridencias." (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pag. 269).

De signo radicalmente contrario a esta pastoral serian las declaraciones que por las mismas fechas haria el obispo de Madrid-Alcalá a un enviado de prensa en Paris. Al ser requerido por la actitud de la Iglesia en relacion a la Republica, contestaria que esta era idéntica a la que la Iglesia tenia ante todos los poderes temporales, por lo que no podia afirmarse que estuviera, ni mucho menos, en contra de ella. Lo que si pedia la Iglesia era el respeto a sus derechos. A estas mesuradas palabras, que en nada diferian de las declaraciones genericas del episcopado en los inicios del nuevo régimen y que eran incluso menos contundentes en la posibilidad del apoyo de los catolicos a este que las pronunciadas por el mismo en su circular de 24 de abril, se añadian otras mas confusas que trataban de una funcion de la Iglesia en el campo de la politica, defendida, segun el prelado, por cuanto su lucha contra ciertos enemigos venia justificada porque estos lo eran tambien de la Republica.

Estas eran las palabras del obispo segun la version de la prensa:

"No estamos ni a favor ni en contra; somos completamente neutrales en politica. La Iglesia se conforma siempre con la que siguen las autoridades civiles. Si nos encontramos en presencia de la Monarquia apoyamos a la Monarquia. Si estamos en presencia de la Republica, apoyamos a la Republica. Los dogmas de la Iglesia no dictan en parte alguna que la Monarquia sea mejor forma de gobierno; lo que pedimos a todos los regimenes, cualesquiera que sean y en cambio a nuestra lealtad, es el respeto a nuestros derechos y a nuestras libertades.

«La Iglesia no se alza contra la Republica. El republicanismo no esta en modo alguno en contradiccion con la religion.

«Dando de lado a todas las consideraciones de orden moral y social, la Iglesia española debe cumplir un deber considerable en el dominio de la politica. Es una organizacion en lucha contra

comunistas y anarquistas, que son tan enemigos de la República como de la Iglesia." (413)

Pese a razonables posturas por parte del episcopado como la que, según vemos, seguía manteniendo el Dr. EIJÓ Y GARAY a los tres meses de proclamarse la República y ya transcurridos los luctuosos hechos de mayo, las posibles armónicas relaciones que entre el poder civil y el religioso pudieran darse distaban mucho de ser reales. Un nuevo hecho, que a simple vista puede parecer baladí pero que tenía su impacto en una sociedad en la que los ánimos, tanto de los más tradicionalistas creyentes y de sus pastores con igual línea de pensamiento como los de los más beligerantes izquierdistas, se encontraban muy exaltados, saltó nuevamente a las páginas de los periódicos a los pocos días de esta reseña de prensa, produciendo el consiguiente revuelo: El ayuntamiento de Ávila había decidido el 7 de agosto cambiar el nombre de la plaza de Santa Teresa en dicha ciudad por el de plaza de la República.

Contra tal acuerdo iniciaría inmediatamente una campaña el diario católico de la provincia y, por ello, La siguiente reunión de la corporación se vería jaleada tanto por "numerosas mujeres, las cuales organizaron una manifestación de protesta" como por "centenares de obreros, los cuales apoyaban el acuerdo municipal", por lo que la sesión había transcurrido "en medio de un escándalo constante", decidiendo la corporación aplazar el asunto y querrellarse contra el diario local "por excitación a la rebelión y por su campaña contra la República." Como consecuencia de estos hechos en la plaza de la Constitución se había reunido "un inmenso gentío que se manifestaba ruidosamente en favor y en contra del Ayuntamiento, menudeando los incidentes y las bofetadas...." y llegando a

(413) "Declaraciones del obispo de Madrid.- El republicanism no está en pugna con la religión", "El Sol", 14 de julio de 1931.

pedir un concejal la expulsión del obispo y de las órdenes religiosas. (414)

Más relevante, empero, para nuestros efectos, que aludir a estos disturbios, prueba, una vez más del "caldo de cultivo" que en su andadura inicial vivió la República entre los sectores más radicales de creyentes y progresistas es referirnos al pronunciamiento de la jerarquía sobre estos hechos, pronunciamiento que nuevamente nos da cuenta de la actitud de una parte del episcopado ante el nuevo régimen. El asunto, en efecto motivó que el obispo de Avila Dr. PLÁ Y DENIEL dirigiera una comunicación llena de mesura y corrección al Ayuntamiento pidiendo la revocación del acuerdo municipal y justificando la permanencia de la toponimia en su estado anterior.

Habiéndose adoptado la resolución municipal en el marco de una variación general de nombres de calles de la ciudad, reconocía el prelado la permanencia de determinadas de ellas que recordaban personalidades religiosas, razón por la que entendía que la sustitución del nombre de la plaza en litigio no respondía a "la intención de satisfacer prejuicios sectarios o desconocer valores consagrados por la humanidad entera...", por ello no se explicaba el acuerdo "que tan honda conmoción ha producido en esta Ciudad" aunque se apoyara en que la plaza en sí había recibido esta denominación del gobierno de la dictadura y que existiera ya otra dedicada a la santa. No era cosa superflua para el obispo entrar en el examen de la cuestión, que, para él, tenía "Una grandísima transcendencia moral" ya que la

(414) "El Ayuntamiento de Avila decide cambiar el nombre de la plaza que Santa Teresa por el de la República". "El Sol", 14 de agosto de 1931. Para enmarcar el verdadero alcance de la noticia el periódico advertía de la existencia de dos plazas con el nombre de la santa, una donde se encontraba su casa y la iglesia y otra así nombrada por la dictadura que era, precisamente, la que el ayuntamiento había decidido cambiar.

imposición del nombre a la plaza lo fue con motivo del tercer centenario de la canonización de la santa avulense. Mas lo que más interesaba al prelado, quizá exagerando la base del acuerdo adoptado por la corporación, era disipar cualquier sesgo de carácter político que se quisiera dar al asunto:

"¿Fue en ello un capricho dictatorial? Nació el homenaje tributado a Santa Teresa de Jesús de especial significación política? Como Presidente de la Junta del Centenario podemos dar fe de que las peticiones de la Junta hallaron benévola acogida tanto de los muy diversos Gobiernos, llamados de derecha uno, de izquierda otro, dictatorial el último, que se sucedieron en los años 1922, 1923 y 1924 en el Gobierno de la nación, como de los Ayuntamientos que tuvo nuestra ciudad durante estos sucesivos Gobiernos."

El centenario, recordaba el obispo, se había celebrado no sólo en toda España sino también en Europa y América Latina, habían acudido a la ciudad representantes de las Academias, las cuales sin excepción otorgaron premios en el certamen celebrado, y, así, el ayuntamiento de Ávila, "nombrado por quien fuera, pero único que existía" se unió a estos actos otorgando el nombre a la plaza.

La única cuestión en litigio, a juicio del obispo, era dilucidar si aquel ayuntamiento había obrado bien o mal, cuestión que ciertamente podía plantear la nueva corporación, pero no debía revocarse, según su opinión, puesto que era esta plaza y no la otra la que había recibido el público y oficial homenaje y tanto valía este como el que ahora se quería tributar a la República, que el prelado insinuaba irónicamente que con el acuerdo se podía pretender contraponer a la Santa

"Quisieramos que serenamente ponderara la mayoría del Excmo. Ayuntamiento si es digno, si es oportuno, si es conveniente para el homenaje que quieren tributar al régimen político de nuestra

España tributárselo en Avila revocando a la vez un homenaje públicamente ofrendado a la Santa. Nosotros no concebimos que se quiera enfrentar a ningún régimen con Teresa de Jesús."

La santa, continuaba al obispo, representaba para España lo que para Francia era Juana de Arco, "y la República francesa a pesar de su mismo laicismo toma parte anualmente en las fiestas y homenajes a la que considera heroína de la patria", actitud que recientemente había recomendado el presidente del Gobierno provisional, recordaba el Dr. PLA Y DENIEL, al afirmar el error de considerar República y tradición como términos incompatibles. Por ello consideraba totalmente legítimo que el ayuntamiento quisiera proclamar el nuevo régimen otorgándole un nombre en la ciudad, pero se permitía indicar la forma oportuna de hacerlo.

"Si nadie puede censurar que el Excmo. Ayuntamiento quiera dar el nombre del nuevo Régimen a una plaza de la ciudad ¿por qué hacerlo de una manera que suscite protestas, que infiera agravios, que lastime sentimientos, que hiera afectos vivísimos de la inmensa mayoría de avileses, como creemos nosotros, de una gran masa por lo menos de ciudadanos, como nadie podrá negar? ¿Y ello siendo tan fácil, tan obvio y tan natural el medio de evitar el conflicto sin dejar de conseguir, consiguiendo muchísimo mejor el fin que se persigue!.. ¿No parece indicada para recibir el nombre de nuevo régimen la plaza donde está emplazado el palacio Consistorial, que es el del Gobierno de la ciudad, plaza hoy denominada de la Constitución que feneció y en cual plaza fué proclamado en Avila el nuevo régimen? No lo insinuamos como un consejo que no nos pertenece dar, pero en régimen de verdadera democracia creemos que no puede censurarse a ningún ciudadano pensar en alto respecto de lo que a la ciudad atañe."

Recordaba el prelado como el había vivido "hasta ahora en cordialidad con todas las autoridades y corporaciones civiles de esta ciudad... y que tanto hemos

derendido teorica y practicamente y con criterio inmutable el respeto debido a la autoridad", pero que tampoco nunca habia practicado el servilismo, por lo que suplicaba se modificara el acuerdo municipal dando el nombre del regimen a la plaza que se considerara conveniente y daba a su peticion el caracter de recurso, aludiendo a que, si eso no se hacia, sentiria "el bochorno, la humiliacion que caeria sobre Avila, sobre todos los avileses, cuando en el mundo entero se divulgase que Avila habia arrancado una lápida de homenaje a su Santa."¹⁴¹⁵

(415) 11 de agosto de 1931, "Comunicacion dirigida por el Excmo. Sr. Obispo al Excmo. Ayuntamiento de Avila pidiendo la reposicion del acuerdo sobre el cambio de nombre a la plaza de Santa Teresa de Jesus", BOE de Avila, año 42, 28 de agosto de 1931, num. 10, pags. 394-400. No tenemos noticia de si el ayuntamiento accedió o no a la peticion del prelado. Por el boletin eclesiastico de la diocesis sólo nos consta que en las fiestas de la santa en el mes de octubre, que se realizaron con la tradicional procesion, se habia notado "la falta absoluta del elemento oficial", aunque la concurrencia habia sido "mucho mayor que otros años, principalmente de caballeros" y si habia participado la banda municipal (s.), "Crónica diocesana.- Las fiestas de Santa Teresa de Avila", BOE de Avila, año 42, 22 de octubre de 1931, num. 12, pags. 461-463). La falta de asistencia de la corporación que ha quedado reseñada no tiene, no obstante, significación alguna respecto a las buenas relaciones entre las autoridades eclesiásticas y civiles pues fue nota comun en toda España la abstencion de estas de participar en los actos de culto católico. Sirva sólo como ejemplo de esta actitud, aparte de la muy relevante de la tradicional ofrenda en Santiago de Compostela a la que ya hemos aludido en la nota 243, la noticia dada por "El Sol" en este año 1931 del acuerdo del ayuntamiento donostiarra de no asistir a la salve tradicional a la Virgen de agosto que anualmente se cantaba en la "sesana grande", acto al que siempre habian presidido las autoridades civiles y aun la reina Cristina si se encontraba en la ciudad. ("El Sol", 15 de agosto de 1931).

Contrasta, sin embargo, con estas actitudes de las autoridades civiles, las reseñas dadas en el boletin eclesiastico de Barcelona de las visitas pastorales efectuadas por el Dr. JURRITA en los meses de noviembre y diciembre de 1931. En la primera se destacaria que "Las Autoridades de la mayoría de las poblaciones saludaron al Sr. Obispo y le acompañaron en los principales actos de la Santa Visita", recibiendo los fieles con total entusiasmo, hecho este que tambien se produciria en la segunda en la que, sin embargo, respecto a las autoridades locales simplemente se decia que "En casi todas las Parroquias, las Autoridades saludaron al Sr. Obispo..." (s.), "Santa Pastoral Visita", BOE de Barcelona, año 74, 21 de noviembre de 1931, num. 21, pags. 655-656 y 31 de diciembre de 1931, 24, pags. 705-706). Las actitudes que se reflejan en estas reseñas, son, a su vez, como se recordará, diametralmente opuestas a las que se vivia en Andalucía donde, ya en 1932, el Dr. ILUNDAIN ni siquiera se atrevia a realizar la visita pastoral. (Ver la nota 396 de este capítulo).

Antes de finalizar este capítulo quereamos advertir que desde la renuncia del cardenal SEGURA hasta la promulgación de las distintas leyes secularizadoras, que el nuevo régimen llevaría a cabo con una simpar diligencia una vez promulgada la Constitución y a lo largo de 1932, existieron relevantes intervenciones de la jerarquía católica e importantes comunicaciones de esta con el gobierno y con la Santa Sede. El hecho de que estas se dieran, precisamente, como consecuencia de la votación del texto constitucional relativo a la cuestión religiosa, nos hace desplazar su tratamiento al capítulo siguiente en el que, por tanto, continuaremos refiriéndonos a la que podemos denominar, actitud general de la jerarquía ante el nuevo régimen una vez vigente la nueva Constitución.

No queremos dejar de indicar, por último, que la tarea realizada para recopilar toda la documentación eclesiástica derivada de su reacción ante la legislación secularizadora dictada en el primer bienio de la República, nos ha hecho encontrar una serie de documentos de contenido genérico resultantes de la labor de la jerarquía a lo largo de 1932 y 1933, documentos que, si no tan reveladores de la actitud de la aquella ante el afán secularizador de la República, arrojan indudablemente una luz complementaria sobre esta.

Cifándose el objeto de esta tesis, como hemos indicado, a la reacción eclesiástica ante la específica legislación secularizadora del primer bienio republicano, entrar en el análisis de esa documentación de carácter genérico, excedería con creces dicho objeto. No obstante, dada la riqueza del material allegado, no nos resistimos a darle un tratamiento sistemático, y, así, como complemento a la estructuración de este trabajo, creemos oportuno, tal como hemos hecho en el caso de las reacciones eclesiásticas ante la legislación relativa a las órdenes religiosas o a la

que incidió en el presupuesto del culto y clero, reservarle el ordenado lugar en el oportuno apéndice, con la esperanza de poder dedicarle la atención que se merece en un tiempo cercano. ⁽⁴¹⁶⁾

Como conclusión de este capítulo introductorio en el que hemos querido referirnos a los más relevantes hitos que marcaron las posturas iniciales de la jerarquía ante el nuevo régimen, queremos destacar los siguientes hechos. En primer lugar, que muchos prelados, antes de recibir las instrucciones del Vaticano, se apresuraron a orientar a los fieles acerca de su actitud ante la República; tanto por parte de estos, como por la de los que se pronunciarían a raíz de dichas instrucciones, hubo una gran variedad de planteamientos, sino en la esencia que informaba la postura que aconsejaban adoptar, sí en la forma de expresarla, forma esta de gran relevancia por cuanto dejaba traslucir una amplia e indudable variedad de pensamiento ante la nueva situación política y que iba desde las posturas más moderadas y conciliadoras (casos de los arzobispos y obispos de Valencia, Valladolid, León, Vitoria, Sevilla, Urgel, Oviedo, Madrid-Alcalá, Salamanca o Tuy), hasta las más opuestas (como serían las manifestadas por los arzobispos u obispos de Toledo, Huesca, Zaragoza, Córdoba, Calahorra, Orense, Mallorca, Tarazona o Málaga).

En segundo lugar, que esta diversa actitud del episcopado desde los primeros momentos siguió dándose incluso ante situaciones de gran dureza para la Iglesia, como fueron los incendios de mayo de 1931, el reconocimiento de la

(416) Ver los apéndices: "Los documentos de carácter genérico de la jerarquía en 1932" y "Los documentos de carácter genérico de la jerarquía en 1933".

libertad de creencias y cultos, o la expulsión del primado y del obispo de Vitoria, así como en relación a situaciones más específicas, tales como las relaciones con su respectivo clero o con las autoridades locales motivadas por actuaciones de estas (posturas apaciguadoras de los cardenales VIDAL y MELO o del obispo IRASTORZA o críticas de los obispos FRUTOS VALIENTE, ALVAREZ MIRANDA, CERVINO o GOMA).

Por último, y como tercer aspecto, preciso es destacar la actuación de los dos prelados que, a nuestro juicio, fueron en este primer periodo, la antítesis de la postura eclesial ante el nuevo régimen: en el extremo más moderado y conciliador, el cardenal VIDAL y BARRAQUER, que, sin dejar de elevar las debidas protestas ante los hitos secularizadores, adoptaría desde el principio la más comprensiva actitud con el gobierno de la República; en el más integrista y opuesto, el cardenal SEGURA, cuya beligerante actitud llevaría a una ardua negociación entre el poder civil y el eclesial en vísperas de los debates constitucionales sobre la cuestión religiosa y a su final remoción de la silla primada.

CAPÍTULO II

=====

LA CONSTITUCION DE 1931

1. Las tomas de postura iniciales de la jerarquia.

Aunque, como ya se ha indicado, la primera alusion que hemos encontrado sobre la necesidad de una accion comun del episcopado ante el nuevo texto constitucional, una vez fueran conocidas las lineas maestras en que este habria de plasmarse, fue la contenida en la Circular numero VI del cardenal SEGURA de 20 de julio de 1931, ya antes de que esta prevision fuera apuntada por el primado, el cardenal VIDAL, en el extenso informe que, fechado el 27 de junio, redactara para el Secretario de Estado vaticano y en el que no solo le daba detallada cuenta de todos los acontecimientos politicos vividos en España, y singularmente en Cataluña desde la proclamacion de la Republica, sino que incluia su personal vision de las causas que la habian propiciado, aludiria tambien al futuro por el que, segun su parecer, habia de discurrir la cosa publica; en esta apreciacion el arzobispo de Tarragona se retiraria tanto a la probable composicion de las futuras Cortes constituyentes, cuya elec-

(1) Ver la nota num. 225 del capitulo "La Iglesia ante la Republica".

ción se iba a efectuar precisamente al día siguiente²² y para las que auguraba una mayoría de grupos de izquierdas, como a que en ellas se habría de abordar "el problema religioso", problema que, según el cardenal -que en este momento no apreciaba que iba a ser uno de los clave de una República empeñada en modernizar a España y en la que muchos de sus mas conspicuos miembros consideraban a la Iglesia como uno de sus principales lastres-, habría de ser tratado "con mucho cuidado, para no hacer el juego a los radicales del Gobierno, que lo suscitarán seguramente para desviar la atención de otros problemas". Estimaba VIDAL que era "muy

-
- (2) Ya hemos aludido en el epígrafe 2.2 del capítulo "La Iglesia ante la República" a la circular suscrita por el cardenal VIDAL el 4 de mayo de 1931 exhortando a los católicos, según las instrucciones recibidas de la Santa Sede, a participar en las elecciones, circular a la que, como hemos indicado, acompañaban como anexo una serie de normas encaminadas a tal fin. Como indican BATLLORI y ARBELLOA (*Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 89, nota 28), tales normas serían reproducidas el 26 de junio por el diario "La Cruz", de Tarragona, transcribiendo los recopiladores de "Arxiu" la que figura en el núm. 72 del anexo y en cuya redacción, como ya hemos detallado, el arzobispo de Tarragona reelaboró las instrucciones vaticanas, endureciéndolas en su personal interpretación (véase la nota 68 y el apéndice núm. 7 del capítulo "La Iglesia ante la República").

Mas, pese al interés de la jerarquía en fomentar la participación electoral católica, algunos autores aluden a la abstención propugnada por los sectores monárquicos (COMAS, Ramón, *Isidro Goma-Francesc Vidal Barraquer. Dos visiones antagonicas de la Iglesia española de 1939*, Salamanca, 1977, pág. 77) o, incluso, a la generalizada que realizaron los católicos, vacilantes ante el cambio de régimen (FERNANDEZ AREAL, Manuel, *La política católica en España*, Barcelona, 1970, págs. 38-41), opinión frente a la que hay que situar la de los que desmenten que la abstención fuera protagonizada por los sectores conseriales, resaltando cómo la participación fue mayor en las provincias "en que la derecha o los católicos politizados eran mas fuertes" y mas baja en los distritos electorales en que el anarcosindicalismo tenía preponderancia. (TURO DE LARA, Manuel, *La España del siglo XX, II, De la República a la guerra civil, 1931-1939*, Barcelona, 1974, pág. 316, para el autor, y en base a las cifras que da, "No cabía duda: la derecha se había 'volcado'").

probable que en las Cortes Constituyentes se presente el proyecto de separacion de la Iglesia y el Estado, la laicizacion de este, y una serie de desatinos", por lo que convenia "ganar tiempo, salvar todo lo que sea posible, que presumo sera bastante, y concertar un arreglo interino o 'modus vivendi', respetando lo existente, mientras duren las gestiones para un Concordato."³ Asi se pasarían algunos meses, y veríamos como se encarrila la cosa publica". A esta estrategia añadia la de la necesidad de actuar con las debidas cautelas "pues si se emplean medios energicos sin la prudencia debida, nos echaran encima el populacho, que esta muy movido, y se causaran daños irreparables a la Iglesia, sin gran resultado practico", hasta el punto de referirse a la probable conveniencia de "dejar pasar alguna cosa sin decir nada", siendo asi lo mejor para el "obrar segun las circunstancias y discrecion aconsejen"; no obstante, en este obrar apuntaba ya al Vaticano su idea de la debida y necesaria coordinacion del episcopado frente a la direccion de un solo prelado que, como hemos visto, habia querido potenciar SEGURA y de la que el de Iarragona ya habia disentido ante el nuncio, reiterando aqui su idea de la actuacion colegiada ya expuesta a TEDESCHINI:⁴ "Han de ir juntas y coordinadas la accion de los seglares, de los sacerdotes, de los Obispos y del Nuncio. Unas han de ser las tropas de choque, otras las que con el tiempo ganen y consoliden la victoria. Tal vez daria excelente resultado que sin llamar la atencion, los Rdmos. Sufraganeos se reunieran con su respectivo Metropolitano, y estos entre

(3) Ver sobre esta cuestion lo indicado en la nota 231 del capitulo "La Iglesia ante la Republica".

(4) Ver en las notas 107, 229 y 256 del capitulo "La Iglesia y la Republica" como fue perfilándose la idea sobre las reuniones de los obispos y metropolitanos a fin de lograr la debida unidad de criterio ante los hechos que se averianaban.

si, y de este modo habria mas unidad y continuidad en la accion, y mas garantia de acierto; y se constituyeran al efecto, si se cree oportuno, Juntas de eclesiasticos y seglares de caracter diocesano, provincial y central...""

No otra cosa que la logica apreciacion de los hechos, con el solido fundamento de los decretos secularizadores que, nada mas iniciar su andadura, habia ido dictando el gobierno provisional, segun exponemos en su correspondiente lugar, hacia prever al cardenal los temas que, desde el punto de vista de los intereses de la Iglesia, serian objeto de debate por las Cortes y de ahí su idea de llegar a un "modus vivendi" antes de que este se produjera en su tarea de dotar al pais de una constitucion acorde con los principios ideologicos que habia propiciado la instauracion del nuevo regimen.

-
- (5) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 79-93. Ya hemos indicado en la nota 202 del capítulo "La Iglesia ante la Republica" que entre los numerosos anexos que acompañaban a esta carta de VIDAL a PACELLI figuraba una "hoja de orientación" sin fecha, redactada por la Acción Católica de la diócesis exponiendo los deberes de los católicos en aquellos momentos, entre los cuales, y aparte de aludir al indiferentismo ante las formas de gobierno, a la sumisión a los poderes constituidos, a la ya referida libertad de cultos y a las relaciones entre la Iglesia y el Estado -sobre las que no admitia su separación, debiendo el Estado amparar el derecho de los ciudadanos a profesar la religión verdadera y respetar el concordato suscrito entre la Iglesia- trataba, por último, de los deberes electorales, indicando que no era lícita la abstención "ellas significan una traición; una covardia vituperable y condenada por Dñu i per la Pàtria", por lo cual los católicos debían participar dando su voto segun las normas pontificias. Op. cit. I, págs. 94-97.

1.2. La actuación a seguir ante el anteproyecto de Constitución.

A fin de facilitar la labor del Parlamento dotándolo de un documento de trabajo, uno de los primeros actos del gobierno provisional había sido el de crear, el 6 de mayo, una "Comisión Jurídica Asesora" entre cuyas principales tareas figuraba la de redactar un anteproyecto del texto constitucional, a cuyo objeto se constituyó en su seno una subcomisión presidida por el católico liberal Angel OSSORIO y GALLARDO y de la que formaban parte personalidades muy destacadas del mundo del Derecho.⁽⁶⁾

Para TUSELL el anteproyecto elaborado por la Comisión jurídica asesora tenía "un carácter considerablemente mas moderno que el que resulto definitivamente aprobado e importantes puntos de coincidencia con la doctrina política que se venia manteniendo en la prensa católica",⁽⁷⁾ siendo a a su juicio probable que "hubiera facilitado la convivencia civil en la época republicana". Este autor añade que uno de los temas trascendentales para la Comisión había sido el religioso, sobre el que, al parecer, hubo unanimidad basada en el acuerdo de introducir la separación de la Iglesia y el Estado y el respeto de la libertad de conciencia y la de

(6) Bajo la citada presidencia de OSSORIO y GALLARDO la subcomisión estaba formada por: A. GONZALEZ POSADA, J. ELOLA, V. CASANUEVA, F. ROMERO OTAZO (sacerdote), L. LAMANA LIZARBE, A. de LUNA y J. LLADO SANCHEZ-BLANCO.

(7) Al margen de las obvias posturas de la prensa confesional hay que destacar que el independiente "El Sol" publicaba el 2 de julio, es decir antes que el anteproyecto fuera presentado al gobierno y dado a conocer por la prensa, un artículo de UNAMUNO titulado "Nación, Estado, Iglesia, religión" y en el que, con sus proverbiales estilo y pensamiento, afirmaba que "...esta Iglesia y esta nación son inseparables": Véase el texto íntegro de este artículo en el apéndice núm. I,

cultos, principios que incluso fueron adoptados por el sacerdote ROMERO UTAZO, con la incomprensión de los sectores más tradicionalistas de la sociedad española "que habían extendido el rumor de que en la Comisión Jurídica Asesora eran los propios sacerdotes los más interesados en romper las vinculaciones entre los dos mundos", hecho que provocó la dimisión del eclesiástico.⁽⁸⁾

Pese a estas posturas hay que señalar que, como destaca ARBELLOA, en lo que atañía a la religión y a la Iglesia, "el anteproyecto era simplemente 'avanzado', sin las más mínima gota de sectarismo",⁽⁹⁾ perfilando "una postura liberal de contenido laico, que consideraba a la Iglesia católica separada del Estado, otorgándole la configuración de corporación especial de derecho público"⁽¹⁰⁾ tal como se preveía hacer con las demás confesiones cuando lo solicita-

(8) TUSELL GOMEZ, Javier, *Historia de la Democracia cristiana en España*, Madrid 1974, vol. I, págs. 212 y 214.

(9) ARBELLOA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España (1931)*, Barcelona, 1976, págs. 26-27.

(10) CASTELLÓ, José Manuel, *Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-administrativo (1767-1965)*, Madrid, 1973, pág. 395. Explicando las razones del fracaso de la fórmula acuñada por el anteproyecto, el autor añade que "El Vaticano no veía con malos ojos esta fórmula, en realidad se trataba de un medio fundamentalmente técnico de regular jurídicamente el problema... Dicho concepto jurídico de corporación de derecho público, imitación evidente del artículo 137 de la Constitución de Weimar no encontraba con todo fácil acomodo en el derecho tradicional español y no era bien visto ni por los republicanos que estimaban demasiado amplias las concesiones que con este término se hacían a la Iglesia católica, ni por los católicos, que lo miraban con desconfianza por prestarse a la igualdad religiosa. Influyó igualmente en su rechazo la circunstancia de que si bien en la Constitución de Weimar podía encontrar su fundamento en las tradiciones del derecho germánico, basados en las fuentes del derecho canónico y en el nuevo derecho religioso aportado por el protestantismo que instituyó las religiones del Estado, en el caso español, de lo que se trataba por el contrario era de separar la Iglesia del Estado, no precisándose, por tanto, el conceder a la Iglesia un determinado "status" privilegiado, con la finalidad fiscalizadora prevista. Además, dada la ideología anticlerical predominante en la Cámara, no parecían las soluciones técnicas o conciliadoras las adecuadas en orden a su aprobación mayoritaria", *Ibid.* pág. 396.

ran y tuvieran garantías de persistencia; se garantizaba la libertad de creencias y de cultos; se reconocía el carácter legal del matrimonio canónico y se admitía el derecho de la Iglesia a tener sus propias escuelas y el de los escolares de centros públicos a recibir enseñanza religiosa con ciertas condiciones.⁽¹¹⁾

Este diseño, sin embargo, "no agradó a los socialistas ni a los republicanos laicistas... el gobierno no se puso de acuerdo con él. Tampoco agradó a los católicos conservadores,⁽¹²⁾ que le declararían pronto la guerra".⁽¹³⁾ Presentado al ministro de Justicia por la Comisión jurídica asesora

-
- (11) Los artículos del anteproyecto que atañían directamente a la Iglesia y a la religión eran los siguientes:

"Artº 8. No existe religión de Estado.

La Iglesia católica será considerada como Corporación de Derecho público.

El mismo carácter podrán tener las demás confesiones religiosas cuando lo soliciten y, por su constitución y el número de sus miembros, ofrezcan garantías de subsistencia.

«Artº 12. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. Todas las confesiones religiosas podrán ejercer sus cultos privada y públicamente, sin más limitaciones que las impuestas por el orden público.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas, a no ser por motivos estadísticos.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, excepto lo dispuesto en el artículo 54, apartado c) de esta Constitución."

(*Església i Estat durant la segona...*, págs. 256-258).

- (12) Destaca TUSELL como anécdoto "El Debate" lo acogió con displicencia "por la 'frialdad hosca' respecto a la religión, aunque no era decididamente hostil a él, da la sensación como si los redactores aforaran la declaración de una confesionalidad (que por supuesto resultaba impensable en la España de la época)", TUSELL GÓMEZ, *loc. cit.*, I, págs. 160-161.

- (13) ARBELLOA, Víctor Manuel *loc. cit.*, pág. 26.

el día 6 de julio y publicado por la prensa al día siguiente, fue rechazado en su totalidad el mismo 7 de julio por el consejo de ministros, pasándose a formar el día 28 una Comisión parlamentaria integrada por veinte diputados y presidida por el catedrático de derecho y miembro del partido socialista Luis JIMÉNEZ DE ASUA, con la finalidad de preparar el proyecto definitivo que había de ser debatido por las Cortes.⁽¹⁴⁾

No obstante, con carácter previo a tales hechos, y según comunicaba el nuncio TEDESCHINI a VIDAL y BARRAQUER por carta de 27 de julio, en la que pedía su parecer sobre las ideas que en ella le exponía, pese a que estas ya habían recibido el beneplácito del Secretario de Estado vaticano, aquel había remitido a Roma el texto del anteproyecto redactado por la Comisión presidida por Angel OSSORIO, recibiendo el encargo de que el episcopado con la nunciatura

(14) Al referirse a la rapidez con que se había caminado para elaborar la constitución, narra PRIETO cómo en diversas ocasiones JIMÉNEZ DE ASUA se había quejado tanto de la prisa que constantemente le dió el gobierno como de que este se hubiera inhibido de formular ponencia propia, atribuyéndose la responsabilidad de esto último, toda vez que ALCALÁ ZAMORA había propuesto que actuara de ponente, a lo que D. Indalecio se había opuesto por la razón esencial del temor a la imposible avenencia entre sus componentes en los preceptos concernientes a materia religiosa. "Por mucho que se avanzara en el camino de las transacciones sobre dicha materia había imaginar algún acuerdo acerca de ella entre los fervorosos católicos don Niceto Alcalá Zamora y don Miguel Maura, de un lado, y del otro, ministros republicanos que se habían pasado la vida combatiendo el predominio de la Iglesia romana en España?. Acaso Alcalá Zamora, confiara que los ministros socialistas, por haberse preocupado preferentemente nuestro Partido de problemas más sustanciales, fuéramos el fiel de la balanza, pero estimando peligrosísima la aventura cerré su paso. El tiempo me dio pronto la razón. Los señores Alcalá Zamora y Maura dimitieron cuando las Cortes aprobaron el artículo 26 de la Constitución...". PRIETO, Indalecio, *Convulsiones de España*, I, México, 1967, págs. 95-96. Véase en el apéndice núm. 2 el editorial de "El Debate" criticando la postura de AZARA ante el problema religioso poco antes de que la Comisión parlamentaria iniciara la elaboración del proyecto de constitución.

"influyesen sobre el Gobierno y sobre los Diputados a fin de que se quitasen o mejorasen los artículos del susodicho anteproyecto atentatorios de los derechos de la Iglesia y de las convenciones entre éste y España". Ante tales instrucciones el nuncio señalaba que le parecía muy difícil influir directamente sobre el gobierno y sobre los diputados, salvo una minoría que no decidiría el asunto, por lo que creía que el medio apropiado sería "mover el problema religioso fuera de las Cortes con una propaganda muy intensa, dirigida a poner de relieve la fuerza, la vitalidad e importancia esencial que tiene la Iglesia en España, demostrando erróneo y vano el combatirla, y útil el respetarla, como única e insuprimible energía nacional. De esta manera toda la posible acción del Excmo. Episcopado cerca del Gobierno y de los Diputados, se encontraría auxiliada por la opinión pública, en estos momentos tan apreciada como nunca"; tal actuación -añadía el nuncio- "debería ser hecha con la más extrema prudencia, bajo el solo aspecto religioso, y sobre todo sin el menor ataque al Gobierno ni a la República, sin intemperancias y sin provocaciones, y poniendo de relieve las doctrinas y los derechos de la Iglesia, y afirmándolos con los medios que a cada Prelado parezcan más oportunos en su ambiente".⁽¹⁵⁾

Al día siguiente de su regreso de Roma,⁽¹⁶⁾ el cardenal VIDAL -que aun no había recibido la carta del nuncio- le daba cuenta de los elogios del Secretario de Es-

(15) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 166-167.

(16) Ver el epígrafe 9.3, "Las directrices al episcopado", del capítulo "La Iglesia ante la República".

tado vaticano sobre su actuación y le proponía que para preparar las enmiendas tendentes a mejorar el anteproyecto de constitución se valiera del arzobispo de Valladolid, Dr. Remigio GANDASEGUI y de algunos seglares de confianza; tales enmiendas, decía, deberían ser "pocas pero fundamentales, que pudieran pasar sin llamar mucho la atención, y servir de base para los artículos de un futuro Concordato, que disminuyera o quitase fuerza a alguna cláusula de la Constitución". La presentación y apoyo de dichas enmiendas debería hacerse, además por "Diputados de prestigio, aunque no fuesen muy significados como derechistas".⁽¹⁷⁾

Como ampliación de esta carta, y una vez conocido el contenido de la del nuncio, pasaba el arzobispo de Tarragona a exponerle, en 1 de agosto, sus ideas sobre el plan a seguir cara a la nueva constitución; estas se ceñían a:

12. Elevar un mensaje a las Cortes en nombre de todos los obispos de la provincia (proyecto este que, expuesto al cardenal PACELLI, había recibido su aprobación); y cuyo texto, una vez aprobado por los sufragáneos en la próxima reunión que mantendría con ellos, le remitiría, así como a los metropolitanos por si quisieran hacer algo semejante en sus provincias, con lo que, reiterando una idea que le era cara "se vería unidad, pero no uniformidad; ésta priva la espontaneidad y es susceptible de ser interpretada como sujeción a órdenes recibidas, comprometiendo cosas y personas que conviene dejar a salvo de todo ataque."⁽¹⁸⁾ El

(17) Op. cit., I, págs. 167-168.

(18) Ver los otros extremos de la carta del cardenal VIDAL de 1 de agosto de 1931 relativas al proceder del cardenal SEGURA en el capítulo "La Iglesia ante la República"; epígrafe 9.3: "Las directrices al episcopado".

contenido de tal mensaje seria la defensa de los derechos de la Iglesia y del mismo "podrian tomar ocasion algunos Diputados para presentar enmiendas oportunas".

29 Tales enmiendas deberia ser pocas (dos o tres) y fundamentales y podrian ser presentadas por diputados como SANCHEZ GUERRA, ORTEGA Y GASSET o MARAÑON, sin excluir la posibilidad de la intervencion de hombres de derecha en sentido integramente catolico.

32 El mensaje, por otra parte, podria servir de pretexto para que desde los pueblos se dirigiesen telegramas al presidente del gobierno y a los diputados, pidiendo el apoyo de las enmiendas, con lo que se promoveria la campaña sugerida por el nuncio.

42 Por ultimo VIDAL descartaba los mitines, conferencias, etc., a los que consideraba "inseguros y tal vez peligrosos" pues las autoridades locales no garantizarian su libertad, "y en algunas partes los extremistas irian a interrumpir dichos actos y provocarian reacciones contrarias, que con el apoyo de la prensa enemiga, la debilidad de las autoridades, el temor de muchos catolicos y la apatia de la gente, nos haran aparecer como una minoria insignificante".(19)

En la contestacion dada por IEDESCHINI a esta carta el 5 de agosto, manifestaba al cardenal su conformidad con la idea de elevar un mensaje de la provincia tarraconense a las Cortes y con que esta era una actuacion que los demas arzobispos podian imitar; en cuanto a las enmiendas a efectuar se comprometia a estudiar el tema asi como el de los diputados que deberian presentarlas, manifestando en

(19) Op. cit. I, págs. 171-173.

principio su coincidencia con los nombres propuestos por VIDAL, "por ser los únicos que podrían hacer aceptables unas determinadas enmiendas, en vez de hacerlas a priori recusables", dada la hostilidad que sufrían en las Cortes los diputados católicos; respecto a los otros dos puntos sugeridos por el arzobispo de Tarragona: el envío de telegramas en apoyo de las enmiendas, como forma de realizar la propaganda a que el nuncio se había referido en la carta de 27 de julio y el excluir de la misma todo proyecto de celebración de mítines y conferencias, TEDESCHINI no hacía comentario alguno⁽²⁰⁾ probablemente por mantenerse en su idea, pese al parecer contrario que, según su solicitud, le había manifestado el cardenal VIDAL, de que la mejor forma de secundar los deseos de la Santa Sede para que se modificase el articulado del anteproyecto, era efectuar una campaña, según las iniciativas de cada metropolitano con sus sufragáneos, fomentando el problema religioso entre los fieles a fin de que, ante la imposibilidad de actuar directamente en el Parlamento por falta del apoyo necesario, la opinión se manifestara fuera de las Cortes en pro de la Iglesia católica, como respaldo de la posible actuación de la jerarquía cerca del gobierno y de los representantes parlamentarios.

Ya hemos expuesto como el 10 de agosto de 1931 el nuncio trasladaría a todo el episcopado estas instrucciones, indicando que cualquier actuación a seguir debería realizarse con la debida prudencia, excluyendo cualquier matiz político y ciñéndose tan sólo a las cuestiones religiosas.⁽²¹⁾

(20) Op. cit., I, págs. 183-185. Como ya hemos indicado en el capítulo "La Iglesia ante la República", epígrafe 9.3., "Las directrices al episcopado", tema importante y complementario en esta carta eran los duros juicios que hacía el nuncio sobre la actuación del primado.

(21) Ver en el capítulo "La Iglesia ante la República" el epígrafe 9.5.i., "Los proyectos de la jerarquía y las directrices de la Santa Sede".

2. Las iniciativas del episcopado anteriores a la carta del nuncio transmitiendo las directrices del Vaticano de 25 de julio de 1931: La circular del arzobispo de Sevilla y las de los obispos de Mallorca y Vich.

Por el "Arxiu Vidal i Barraquer" sabemos que mientras el cardenal VIDAL cruzaba esta correspondencia con el nuncio, por propia iniciativa y en solitario se habia dirigido el 3 de agosto al presidente del gobierno ALCALA ZAMORA, relicitandole por la confianza otorgada por las Cortes constituyentes y exponiendole su preocupacion por el anteproyecto de constitucion, ante la que le rogaba que interpusiera toda su influencia para que fuera "una verdadera obra de pacificacion, que pueda ser acatada, aun en el fuero interno, por todos los catolicos", solicitandole, igualmente, que interviniera para el pronto inicio de las gestiones tendentes a arreglar con la Santa Sede todas las cuestiones pendientes. El juicio del cardenal sobre el primer texto preparado por la comision de Angel OSSORIO, a pesar de la suavidad que revestia respecto a la version posterior, no dejaba de ser duro, defendiendo la tradicional confesionalidad del Estado:

"El proyecto de Constitucion es una apostasia del Estado, ofensa publica y gravisima a nuestro buen Dios, Señor de los que gobiernan. No podemos olvidar que los Estados, lo mismo que los particulares vienen moralmente obligados a profesar la religion verdadera, y mayormente alli donde la sociedad es aun profundamente religiosa. No quiere esto decir que se obligue a todos los que ejerzan cargos publicos a profesar la Religion

de nuestros padres, pero si a respetarla y a no poner obstáculos a las instituciones de su dependencia, o a sus subordinados, a que la practiquen con entera libertad. Aunque en nuestra patria existen algunos miles de ciudadanos adheridos a cultos disidentes, al ateísmo, al indiferentismo, etc., no puede negarse que la inmensa mayoría están bautizados, se casan y son enterrados de conformidad al rito católico viven de la savia de la Iglesia y practican la Religión más o menos perfectamente, y buscan la autoridad y el prestigio del Párroco o Sacerdote para que les guíe, les aconseje y aun les defienda. A una sociedad en esta forma internamente constituida no se la puede declarar atea en su Código fundamental; aparecería ante todo el mundo como una violencia ejercida sobre la colectividad, que en su gran mayoría no intentó tal cosa al votar el cambio de régimen."⁽²²⁾

Como respuesta a esta carta y por otra del 6 de agosto ALCALÁ ZAMORA invitaba al cardenal VIDAL a mantener una conversación personal, indicándole que la Cámara podía "propender en algún problema a ser más radical que el país", si bien le parecía probable que predominaran las soluciones transaccionales.⁽²³⁾ Alegando cuestiones de salud el cardenal declinó la invitación, comunicando al presidente el 14 de agosto que, dada la premura de tiempo, enviaba en su lugar al sacerdote de su total confianza Dr. Luis CARRERAS,⁽²⁴⁾ tal como también había comunicado al nuncio al remitirle el día 9 copia de la correspondencia mantenida con ALCALÁ ZAMORA y darle cuenta de los acuerdos adoptados por la conferencia episcopal tarraconense celebrada el día 7, ⁽²⁵⁾ extremos ambos sobre los que igualmente informaría al cardenal PACELLI en carta de 12 de agosto.⁽²⁶⁾

(22) Op. cit. I, págs. 178-181.

(23) Op. cit. I, pag. 186.

(24) Op. cit. I, pag. 213.

(25) Op. cit. I, págs. 194-196.

(26) Op. cit. I, págs. 202-209.

Mientras iba teniendo lugar el entrecruzamiento de esta correspondencia y antes de recibir la carta del nuncio de 10 de agosto, varios miembros del episcopado iniciaron por su parte la publicación de exhortaciones a los católicos instándoles a rogar, ante la inminente labor a desarrollar por las Cortes, en pro de una constitución favorable para los intereses de la religión, exhortaciones que, habiendo de ser leídas como era tradicional, en todas las iglesias, implicaban de suyo una toma de postura cara a los fieles y un juicio de valor acerca de lo que, para la Iglesia, habría de contener la norma suprema para poder ser asumible por los creyentes.

El primero en publicar documentos de esta índole sería, según los boletines eclesásticos consultados, el arzobispo de Sevilla, cardenal ILUNDAIN por medio de una circular fechada el 2 de agosto y en la que expresaba las "angustias y preocupaciones" que sentía "ante la incognita de la que será en definitiva la Ley fundamental del Estado", toda vez que si le interesaba el bienestar temporal de España, más le importaba su bienestar religioso, al ser la religión "la mayor obligación moral del hombre y la base fundamental de la prosperidad social"; no existiendo más que una religión verdadera, la católica, con sus dogmas y organización que la hacían "sociedad perfecta, sobrenatural, suprema en su género". Sociedad cuyas relaciones con el Estado habrían de verse afectadas por la nueva Norma Suprema, de cuyo contenido pasaba a hablar el arzobispo, sin mencionar las disposiciones atentatorias a los derechos de la Iglesia ya dictadas por el gobierno provisional desde los inicios de su andadura, calificando su bondad o maldad según fuera a respetar o no los intereses de la religión:

"La futura Constitución española habrá de establecer normas y bases que afectarán a la relación que el Estado tendrá con la Iglesia católica a que pertenecen la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y a la posición en que el

Estado se colocara ante la Autoridad de la Iglesia catolica, ante la ensenanza religiosa y la vida de las instituciones religiosas y otros muchos sagrados intereses que no es licito dejar desatendidos y mucho menos seria licito menospreciarlos y postergar."

Por todo ello, y ya que la misericordia divina se inclinaba hacia los que oraban, preciso era elevar perseverantes preces, ya que, añadia:

"Estimamos que la necesidad es muy apremiante: los bienes o los males que pueden sobrevenir de la Constitucion, segun que esta fuese buena o no lo fuese, seran de consecuencias gravisimas para la vida religiosa del pueblo, para la educacion cristiana de los niños, para el porvenir y suerte que ha de correr la familia cristiana, para la formacion del buen ciudadano catolico, para el verdadero bienestar de nuestra patria."

Ante tal alternativa de futuro los fieles deberian pedir que la luz divina influyera en los diputados de las Cortes constituyentes, ya que

"Bien pudiera suceder que las oraciones fervorosas hagan inclinar la voluntad de las personas que intervendran en la aprobacion de la Constitucion espanola con tal eficacia que vean, amen y resuelvan rectamente, prudentemente, sabiamente, provechosamente, los problemas que afectan a la verdadera religion y a la Santa Iglesia catolica en su relacion con la vida nacional y la vida moral y cristiana de los españoles."

Los catolicos, pues, debian orar "por la libertad de la Iglesia" y para que fueran respetados sus derechos y deberian hacerlo mientras durasen las deliberaciones en las Cortes a fin de que se disiparan "los prejuicios que en algunos espíritus hay en contra de la Iglesia, que ampare a España en los momentos actuales para que la futura Constitucion sea, cuanto es posible, lo que el bien espiritual, religioso, moral y material de España demanda, y

no se sigan daños que serían funestos por su importancia y su trascendencia en la vida nacional". A tal fin el arzobispo finalizaba la circular disponiendo la realización de una serie de actos de culto hasta que fuera promulgada la futura ley fundamental.⁽²⁷⁾

Al referirnos a la circular suscrita por el poco prolífico obispo de Mallorca Dr. José MIRALLES y SBERT instando a sus fieles al acatamiento a los poderes constituidos⁽²⁸⁾ ya indicamos que lo escueto de su contenido y la fría postura que adoptaba ante el nuevo régimen nos inducía a situarlo entre aquellos miembros de la jerarquía que contemplaban recelosamente el cambio político. El segundo documento salido de la pluma del Dr. MIRALLES para referirse a la cosa pública vendría a confirmar plenamente la actitud que cabía atisbar en su circular de 27 de abril, toda vez que, al dirigirse en el mes de agosto a sus fieles para exhortarles a la oración ante la inminente presentación a las Cortes del proyecto definitivo de constitución, siguiendo la pauta marcada por el de Sevilla, iba a pronunciarse, en contraste con el silencio de aquél, críticamente contra los sucesos habidos desde su anterior documento, el cual comenzaba citando para recordar lo acertada que había sido su exhortación de entonces en pro de la oración para alcanzar "el bien de la tranquilidad social".

(27) 2 de agosto de 1931, "Circular ordenando preces y oraciones en la diócesis". BDE de Sevilla, año 74, 3 de agosto de 1931, núm. 1185, págs. 249-253. Esta circular, a la que el cardenal LLUNDAIN no aludiría en las cartas enviadas a VIDAL por aquellas fechas (29 de julio y 8 de agosto), sería hecha suya por el obispo de Córdoba, Dr. Adolfo PÉREZ MURDZ, quien también ordenó su lectura a los fieles y dispuso la celebración en su diócesis de los actos de culto establecidos por el arzobispo, 17 de agosto de 1931, "Circular ordenando preces y oraciones en la diócesis", BDE de Córdoba, año 74, 18 de agosto de 1931, núm. 11, págs. 228-230.

(28) Ver la nota núm. 50 del capítulo "La Iglesia ante la República".

"Cuán conveniente fuese aquel encarecido ruego, lo han patentizado, por desgracia, con creces, las deplorables disposiciones emanadas del Poder civil en materia religiosa, pedagógica y administrativa; las perturbaciones de orden publico a pretexto de mejoramientos economicos: el desenreno de la Prensa contra nuestra Religion sacrosanta, sus celosos Ministros y las instituciones dedicadas a seguir y practicar los consejos de Cristo: las destrucciones de edificios consagrados al culto divino y a la enseñanza de la Ciencia y Moral cristiana; y, para no repetir lo que el Episcopado español ha dicho al Gobierno por medio de los Excmos. Sres. Metropolitanos, lo que en Mallorca se han permitido, excediéndose de sus atribuciones, Autoridades locales y Corporaciones municipales. Ahora, pero, nuestra exhortacion ha venido a crecer en oportunidad, pues esta a punto de ser presentado a las Cortes Constituyentes el proyecto de Constitución que ha de regular en adelante la vida publica española en todos los ordenes de la humana convivencia. De lo que los representantes nuestros lleguen a estatuir, dependeran las relaciones entre la Iglesia y el Estado, la educacion e instruccion de nuestra juventud, el orden entre propiedad y trabajo, la subsistencia de las Ordenes Religiosas ocupadas en procurar la misericordia de Dios y en socorrer necesidades de alma y cuerpo de sus semejantes, la conjuncion de los españoles en pensamientos y afectos, la salvaguardia contra las doctrinas y practicas antisociales, el crecimiento de nuestra Patria en el bienestar, la cultura y la unica verdadera civilizacion."

Tras recordar a sus rielees estos hechos y avistarles el futuro, les exhortaba a Orar, a fin de que Dios inspirara en los legisladores "ideas de rectitud y justicia, aianes de bien social y resoluciones propias de gobernantes pacificos y de ciudadanos libres de todo insano prejuicio", a cuyo fin, añadia, en una actitud menos confiada u optimista que la que hemos visto reflejada en el esperanzado escrito del Dr. ILUNDAIN, que debian procurar que no les remordiera la conciencia por haber sido frios en sus imprecaciones "sea cual fuere lo que la Providencia consienta para nuestra Espana".

Y tras esta objetiva descripción de lo que, a su juicio, consideraba que había de ser la figura del buen legislador, establecía el Dr. MIRALLES una serie de actos religiosos, un punto más duros o más extensos que los fijados por el arzobispo de Sevilla, encaminados a alcanzar el logro no sólo de una constitución que garantizase el armónico desarrollo de los parámetros que había enunciado, si no, también, concretamente, los siguientes fines con cuya enumeración finalizaba el obispo su escrito:

"Oremos todos por la libertad de la Iglesia, por el retorno de los Prelados constreñidos a vivir lejos de sus fieles, por la subsistencia de la Ordenes Religiosas, por la educación católica de la juventud, por el quebrantamiento de la Prensa sectaria, por el decoro de la mujer cristiana en el vestir propio y de sus hijas, por la abolición de las leyes y disposiciones impías, por una Constitución como la que España necesita."⁽²⁹⁾

El Dr. D. Juan PERELLÓ y POU obispo de Vich también decidió, por su parte, interpretando el acuerdo adoptado en la conferencia eclesíástica tarraconense celebrada el 7 de agosto a que más adelante aludiremos, dictar una circular estableciendo actos de culto muy similares a los determinados por el cardenal ILUNDAIN a fin de que durante los trabajos de las Cortes constituyentes los fieles elevaran oraciones para que Dios "se digné iluminar las inteligencias y mover los corazones de los Sres. Diputados de manera que en la nueva Constitución fundamental del Estado no se niegue al César lo que le pertenece, pero también se de a Dios lo que es suyo". Todo ello porque según decía, a fin de concienciar a los fieles y estimular su piedad:

(29) 9 de agosto de 1931, "Circular XXXIX pidiendo oraciones", BOE de Mallorca, año 71, 12 de agosto de 1931, núm. 10, págs. 185-187.

"Gravísimos son los momentos que atravesamos. El cambio de régimen trae consigo un cambio de procedimientos y hasta de la misma Constitución fundamental del Estado. Es tal la gravedad del problema que reclama la atención y cooperación de todos. La indiferencia en estas materias es censurable y antipatriótica. Hemos de amar a Dios y a la Patria por ser esta criatura de Dios y obra de sus manos. Y ese amor ha de ser el acicate que nos mueva a procurar a España el mayor bien posible en el orden económico, social y religioso. En el económico, proporcionando un pedazo de pan a los indigentes por todos los medios que dicte la caridad cristiana. En el social, creando un ambiente de paz dentro y fuera de España y apoyando siempre el principio de Autoridad para el mantenimiento del orden. En el religioso, haciendo cuanto esté a nuestro alcance porque la Constitución no sea atea, como algunos pretenden, sino confesional, que respete a Dios y a su enviado Jesucristo, Rey de reyes y Señor de los que dominan, que proteja a la Iglesia Católica y a sus hijas legítimas las Ordenes religiosas por medio de Concordato con la Santa Sede." (30)

(30) 14 de agosto de 1931, "Circular núm. 9, Prescribiendo oraciones", BDE de Vich, año 77, 14 de agosto de 1931, núm. 2079, págs. 424-425.

3. El documento "colectivo" del cardenal SEGURA.

En el capítulo introductorio "La Iglesia ante la República" hemos descrito las anomalías que acompañaron a la publicación del documento colectivo que aparecería en el boletín eclesiástico de Toledo del 14 de agosto rechazado el 25 de julio, remitiendo al apéndice número 29 de dicho capítulo para el conocimiento del publicado por el boletín eclesiástico de Tarragona en 17 de agosto. Ioca ahora referirnos al que con carácter general fue difundido a partir del texto publicado por el boletín de Toledo que, como hemos expuesto, fue irónico, según comentario del nuncio, que hubiera de aparecer firmado por todos los prelados, cuando su único artífice era el cardenal SEGURA.

El documento, en el que se hacía alusión constante a diferentes textos de distintos pontífices, en una forma en que, como hemos dejado apuntado, los mismos parlamentarios de derecha criticaron, comenzaba refiriéndose a las normas dadas por el episcopado sobre el acatamiento debido a los poderes constituidos y sobre los deberes en orden a la elección de diputados, indicando que la jerarquía volvía ahora a elevar su voz a fin de no "dejar desamparados sacratísimos intereses", como podía suceder si no aleccionaba a los fieles sobre los extremos del proyecto de constitución que se referían a la religión, exponiendo sobre ellos la doctrina de la Iglesia, habida cuenta, sobre todo, como ya adelantaba desde el inicio del documento el primado, que "el proyecto de constitución tiene tan serios inconvenientes, que, si prevaleciera tal como ha sido presentado, crearía a la Iglesia en España una situación

gravísima, que a todo trance es necesario precaver si queremos evitar perniciosísimos males, principalmente en el orden religioso y moral, aunque también trascendería al orden social y aun al mismo orden material."

Duro juicio el de SEGURA, sobre todo si tenemos en cuenta que su documento no examinaba el que realmente había de ser el proyecto definitivo debatido por la Cámara si no el anteproyecto, mucho más favorable a los intereses de la Iglesia, elaborado por la comisión presidida por Angel OSSORIO y rechazado por el gobierno; extremo este que el cardenal parecía ignorar al señalar erroneamente que se había "presentado ya, por una comisión jurídica asesora, al estudio, discusión y aprobación de las Cortes Constituyentes el proyecto de Constitución por la cual se ha de gobernar España en el nuevo régimen."

Tras el corto preámbulo que contenía estas apreciaciones el documento se estructuraba en los siguientes epígrafes: "El laicismo del Estado"; "El origen del poder civil (art. 1º)"; "El Estado sin religión (art. 8º)"; "La separación de la Iglesia y del Estado"; "La subordinación de la Iglesia al Estado (arts. 8, 12, 21, 31)"; "Las libertades modernas (arts. 12, 18, 31)" y "Deberes de la hora presente".

En el primer epígrafe "El laicismo del Estado", destacaba el primado como en el texto a que aludía "implantase sin atenuaciones el absoluto laicismo del Estado, con sus diversas manifestaciones y consecuencias, que se concretan en el articulado en proposiciones explícitamente condenadas por la Iglesia", pasando a anatematizar tal implantación con cita de los párrafos de la encíclica de Pío XI "Quas primas" en los que se califica al laicismo como "peste de nuestros tiempos" y se describen sus, para la Iglesia, inicuos frutos.

En el epigrafe siguiente, "El origen del poder civil", SEGURA prestaria singular atencion -a diferencia de lo que haria, segun veremos, el mensaje elevado a las Cortes constituyentes por la provincia eclesiastica tarraconense- a la formula en que, en el articulo primero del texto, se declaraba que todos los poderes emanaban del pueblo, al considerar que tal declaracion implicaba de suyo la total negacion del origen divino del poder, por lo que, no entrando en el analisis de sus posibles matices, como hemos visto que hiciera el Dr. GOMA al tratar de esta cuestion en su pastoral de 10 de mayo,⁽³¹⁾ pasaba a condenarla sin paliativos, afirmando que "de este postulado del ateismo oficial, encarnado en las democracias sin Dios de nuestros días, derivanse terribles secuelas para el regimen de la sociedad", razon por la que la Iglesia habia condenado estas "perniciosas doctrinas", segun avalaban los parrajos de la "Inmortal Dei", de Leon XIII, y de la "Ubi arcano", de Pio XI, que transcribia.

Pasaba seguidamente el primado a tratar de "El Estado sin religion", comentando el articulo 82 del anteproyecto en el que, entre otras determinaciones,⁽³²⁾ se declaraba que no existia religion del Estado, formula que, para el cardenal, equivalia, frente al bien hecho a las sociedades humanas por el fundador de la Iglesia a traves de ella, a un rechazo analogo a la que, segun los evangelios, le llevo a la crucifixion. Esta actitud, que SEGURA veia reflejada en el texto del articulo, le llevaba a afirmar, en una exagerada condena del moderno constitucionalismo, que era "imposible medir los males que los pueblos se acarrean al proscribir en sus codigos fundamentales el reinado social de Jesucristo", afirmacion que pretendia avalar con unas frases de la "Quas

(31) Ver la nota 82 del capitulo "La Iglesia ante la Republica".

(32) Ver la nota 11 de este capitulo.

primas", de Pío XI, en las que, si bien se hablaba del acatamiento de las autoridades públicas a la religión católica, no venía a defenderse la plasmación de esta actitud a nivel de declaración constitucional de confesionalidad, como el trinado pretendía so riesgo de impensables males; otras citas de la "Quanta cura", de Pío IX, y de la "Mirari vos", de León XIII, completaban la doctrina que SEGURA quería transmitir.

Indicaba a continuación el cardenal que con todo cuanto precedía en su exposición ya podían los fieles formar su juicio sobre el tema de la separación de la Iglesia y del Estado, tema al que se ceñía el nuevo epígrafe de la pastoral, mas, para mejor sustentar este, pasaba a efectuar, sin comentario personal alguno, una prolija serie de citas de textos de distintos pontífices, todos ellos condenatorios, en una u otra forma, de las doctrinas que pudieran defender la separación de ambas potestades, yuxtaponiendo, así, frases de la encíclica "Mirari vos", de Gregorio XVI; del "Syllabus", de Pío IX; de las encíclicas "Immortale Dei" y "Au Milieu" y de la carta "Longina oceanis", de León XIII, y de la encíclica "Vehementer" de Pío X.

Comentando los artículos 8, 12, 21 y 31 del anteproyecto criticaba el trinado "La subordinación de la Iglesia al Estado", como consecuencia práctica de la separación de las dos potestades, la equiparación que se pretendía de la Iglesia Católica con otras corporaciones de derecho público.⁽³³⁾ formula que, para SEGURA, equivalía a reconocer una total dependencia del Estado de la "sociedad perfecta, soberana e independiente" que era la Iglesia, en cuanto a su actuación y atribuciones, cuando, contrariamente, siendo, como era "por naturaleza, origen y

(33) Ver lo indicado sobre este punto en la nota 10 de este capítulo.

fin", superior a aquel, nunca podria ser considerada una corporacion que le estuviera subordinada; afirmacion que el primado fundamentaba, nuevamente, con citas de enciclicas de Pio IX y Leon XIII en las que, obviamente, no se contemplaba en forma expresa la figura que el anteproyecto pretendia establecer, sino que se condenaba genericamente toda opinion que defendiera el sometimiento de la Iglesia al Estado o que considerara que aquella no era una sociedad perfecta. Tal opinion o "falsa doctrina de la subordinacion de la Iglesia al Estado" engendraba, a su vez, segun apuntaba el cardenal, "otras funestas consecuencias" que eran tenidas por conquistas de la soberania popular aunque en realidad no eran sino "extralimitaciones del poder civil": "la educacion de la niñez y de la juventud, la existencia y actuacion de las ordenes religiosas, la independencia de los prelados y sacerdotes en su sagrado ministerio y la inmunidad eclesiastica", extremos todos ellos que, anadia SEGURA, habian sido suficientemente tratados por los distintos pontifices, si bien bastaba para su proposito referirse, como hacia, a la doctrina sentada en el "Syllabus" de Pio IX.

En el epigrafe siguiente, relativo a lo que el primado llamaba "las libertades modernas", exponia como estas eran consideradas "como la mas preciada conquista de la Revolucion francesa, y tenidas como intangible patrimonio de las democracias enemigas de la Iglesia", dimanando "de la cenagosa fuente de la Reforma protestante del siglo XVI", que habia subvertido el orden del mundo, tanto en lo religioso como, mas tarde, "a traves del filosofismo", en lo civil y que, singularmente, se habian plasmado, como apuntaba Leon XIII en su enciclica "Libertas" en "la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de cultos", transcribiendo el primado, entre otras citas, el párrafo en que tales libertades eran condenadas.

Finalizaba la pastoral con una referencia a los deberes, "Los deberes de la hora presente", que imponía a los católicos el próximo debate constitucional de un texto cuyas estipulaciones contrarias a la Iglesia acababa de evidenciar. Deberes que se centraban en la necesidad de conservar y defender su fe bajo las directrices del Vaticano, a las que el mismo se había querido ceñir en su exposición "en la que nada hemos querido decir de nuestra cosecha", para lo cual una de las cosas que debían hacer era evitar "en cuanto sea posible, el trato con los enemigos de la Iglesia" pero, sobre todo, no leer la "mala prensa... esa prensa impia, blasfema y procaz, que es ariete demoledor de la fe, de las buenas costumbres y aun del orden y prosperidad de los pueblos"; a ello habrían de unir la "constancia y fortaleza en la acción" ante los sagrados intereses que defendían, siendo preciso "pelear denodadamente" para lograr la victoria. Tales deberes atañían con carácter general a todos los fieles, pero a dos sectores quería dirigirse especialmente el primado: a los diputados católicos y a la prensa confesional para recordar a los primeros sus especiales obligaciones y para estimular a la segunda, (quizá con el pensamiento puesto en su predilecto "El Siglo Futuro"), a continuar en la defensa de los intereses de la Iglesia:

"Los católicos que tienen representación en las Cortes Constituyentes están gravemente obligados en conciencia a propugnar, por cuantos medios legítimos estén en sus manos, los sacrosantos derechos de la Iglesia, referidos en el proyecto de Constitución.

"Los periódicos católicos, que tan abnegadamente y a costa de grandes sacrificios, sostienen enhiesta la bandera de la doctrina y de los derechos de Jesucristo, deben continuar combatiendo por la buena causa sin tregua y sin desmayo, con el resuelto apoyo de los buenos y con la bendición amplísima de la Iglesia, que contempla agradecida su abnegación y su valor."

La actuación de estos dos singulares sectores era, también, extensible a todos los fieles por cuanto "los hijos todos de la Iglesia católica en España, ante el riesgo a que están expuestas su fe y sus santas tradiciones" debían "actuar en la vía pública con prudente decisión y energía", luchando por sus creencias. Junto a ello precisas eran "en esta hora de suprema trascendencia", la penitencia y la oración, por lo que los católicos deberían apartarse "de las diversiones y pasatiempos del mundo", manteniendo "una santa austeridad de costumbres" e impetrando el reinado de Dios no sólo en sus vidas sino también "en la tópica y nostálgica añoranza de la hegemonía de la Iglesia" "en esta amada patria nuestra, que, si en lo pasado fue 'la nación católica' por excelencia, no renunciara en lo venidero, así lo esperamos, a este título sobre todos glorioso."⁽³⁴⁾

(34) 25 de julio de 1931, "Carta Pastoral del Episcopado sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a los católicos", BDE de Toledo, año 87, 14 de agosto de 1931, núm. 6, págs. 269-280. Incluimos el texto íntegro de la pastoral en el apéndice núm. 3.

Ya hemos hecho referencia en el capítulo "La Iglesia ante la República" a la publicación realizada por el boletín eclesiástico de Tarragona de 17 de agosto de 1931 (véase la nota 283 de dicho capítulo), debiendo resaltar ahora que, entre los boletines consultados, únicamente el de la diócesis de Urgel efectuaría la publicación del texto dado por "La Gaceta del Norte", tomándolo del boletín de Tarragona, si bien más lo debió de hacer por seguir la pauta del arzobispado que, como había ocurrido en aquel caso, por desconocimiento del documento de Toledo, dada la fecha en que realizó tal publicación; BDE de Urgel, año 76, 15 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 244-309. Los boletines de Vich, Gerona y Barcelona insertarían el texto publicado por el de Toledo.

Las publicaciones de Tarragona y de Urgel, si bien relevantes -principalmente la primera-, no dejan de ser anecdóticas ya que el resto de los boletines eclesiásticos consultados publicarían el texto dado por el de Toledo si bien, y ello es desconcertante, consignando en ocasiones diferentes fechas, según destacamos a continuación, señalando las que fueron distintas a la general de 25 de julio:

- BDE de Valencia, 15 de agosto de 1931, núm. 2129. Lo incluye como suplemento del boletín, págs. 269-283.
- BDE de Málaga, año 64, 15 de agosto de 1931, núm. 9, págs. 337-353.
- BDE de Valladolid, año 56, 16 de agosto de 1931, núm. 8.
- 15 de agosto de 1931, BDE de Córdoba, año 74, 18 de agosto de 1931, núm. 11, págs. 216-228.

-
- 15 de agosto de 1931, BDE de Sevilla, año 74, 19 de agosto de 1931, núm. 1186, págs. 273-290.
 - BDE de Zaragoza, año 70, 19 de agosto de 1931, núm. 17, págs. 381-397.
 - BDE de Palencia, año 81, 22 de agosto de 1931, núm. 18, págs. 533-550.
 - s.f., BDE de Mallorca, año 72, 21 de agosto de 1931, núm. 11, págs. 185-209.
 - BDE de León, 25 de agosto de 1931, núm. 15, págs. 391-412.
 - BDE de Calahorra, año 72, 25 de agosto de 1931, núm. 12, págs. 295-314.
 - 23 de julio de 1931, BDE de Gerona, año 75, 26 de agosto de 1931, núm. 11, págs. 361-380.
 - 10 de agosto de 1931, BDE de Barcelona, año 74, 20 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 497-515.
 - BDE de Avila, año 42, 28 de agosto de 1931, núm. 10.
 - BDE de Vich, año 77, 31 de agosto de 1931, núm. 2080, págs. 427-441.
 - BDE de Segovia, año 76, 31 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 345-364.
 - BDE de Burgos, año 74, 31 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 409-419 y 15 de septiembre de 1931, núm. 17, págs. 425-434 (conclusión).
 - 15 de agosto de 1931, BDE de Santiago, año 70, 31 de agosto de 1931, núm. 2658, págs. 361-380.
 - BDE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de agosto de 1931, núm. 670, págs. 641-662.
 - BDE de Vitoria, año 67, agosto de 1931, núm. 18, págs. 577 y ss.
 - BDE de Orduña, año 50, 1 de septiembre de 1931, núm. 15, págs. 273-289.
 - BDE de Coria, año 66, 1 de septiembre de 1931, núm. 17, págs. 257 y ss.
 - BDE de Pamplona, año 70, 1 de septiembre de 1931, núm. 1716, págs. 356-371.
 - BDE de Astorga, año 79, 1 de septiembre de 1931, núm. 17, págs. 273-293.
 - BDE de Granada, año 86, 1 de septiembre de 1931, núm. 3486, págs. 689-701 y 15 de septiembre de 1931, núm. 3487, págs. 705-714 (conclusión).
 - BDE de Oviedo, año 57, 15 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 257-272 y 1 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 273 y ss (conclusión).

4. Los mensajes de las provincias eclesiásticas a las Cortes constituyentes y el proyecto de constitución de la Comisión parlamentaria.

4.1. *El mensaje de la provincia eclesiástica de Tarragona.*

Tal como el cardenal VIDAL comunicara al nuncio en carta de 9 de agosto, y al cardenal PACELLI el día 12, entre los acuerdos adoptados por la conferencia de eclesiástica tarraconense del día 7 anterior figuraba, secundando los deseos tantas veces expuestos por el cardenal y haciéndose también eco de los transmitidos por el nuncio en la carta del 27 de julio, el de "elevar un razonado Mensaje Colectivo de los Prelados de esta Provincia Eclesiástica a las Cortes Constituyentes, en defensa de los derechos de la Iglesia, e interesar por diferentes medios, publicos y particulares, la acción de los católicos, para proponer y defender las oportunas enmiendas al proyecto de Constitución".⁽³⁵⁾

Como consecuencia de dicho acuerdo y contando con la aprobación tanto de Roma como del nuncio, el cardenal VIDAL había encargado a un equipo de sacerdotes la preparación del Mensaje, indicando los puntos que en él habían de tratarse y con la idea de que, aunque las Cortes no lo atendieran, serviría de orientación a los católicos, moderando a los extremistas y despertando a los neutros; el mensaje debería revestir "una forma suave y dulce, que haga pasar la doctri-

(35) *Església i Estat durant la segona...*, I, pags. 188-193.

na, sin que vean ni por asomo el ánimo de molestar o atacar; sólo la defensa de los intereses sagrados que nos han sido confiados" y puesto que la Comisión parlamentaria no había dado aún el dictamen sobre la Constitución, deberían tocarse los puntos en general, sin aludir al proyecto si bien teniendo en cuenta el parecer de aquella sobre los títulos que ya llevaba examinados. Una vez concluido el trabajo el equipo debería remitirlo tanto a él como a sus sufragáneos a fin de que estos hicieran las observaciones oportunas antes de darle la forma definitiva y proceder a su envío y publicación.⁽³⁶⁾

El documento de la provincia eclesiástica tarraconense era un extenso alegato en el que se exponía la doctrina católica entonces vigente sobre las relaciones entre el poder civil y el eclesiástico y sobre los extremos que, interesando a la Iglesia, podrían ser objeto de regulación por el nuevo texto constitucional. Por el interés del cardenal VIDAL en que esta iniciativa nunca pudiera considerarse un ataque al régimen constituido comenzaba con mucha mayor suavidad que el redactado por el cardenal SEGURA al hacer referencia en primer lugar al actamiento del episcopado a tal régimen y al proclamar el indiferentismo de la Iglesia ante las distintas formas de gobierno; en otros extremos, no obstante, el documento, no podía sino seguir,

(36) Op. cit. I., págs. 244-247. Sólo el obispo de Barcelona, Dr. IRURITA, expresaría dudas sobre la conveniencia de proceder a su publicación al ser tan reciente la de la carta colectiva de 25 de julio en la que se trataban algunos puntos "casi con los mismos argumentos"; a esta prevención contestaría VIDAL -que colaboró muy directamente en la redacción final del texto- señalando que el nuncio consideraba oportuna tal publicación, por lo que el Dr. IRURITA procedió a insertarlo en el boletín de su diócesis.

como es obvio, las doctrinas pontificias y, así, venía a ser coincidente en muchos puntos con la exposicion hecha por el primado, aunque con las importantes salvedades de que no procedía a enjuiciar ni atacar de frente ningun parrasio del anteproyecto, como aquel habia hecho, artículo por artículo, y de que utilizaba un lenguaje expresivo de un mayor deseo de cooperacion.

Constaba el mensaje de catorce epigraes con los siguientes titulos: "Acatamiento al poder civil", "Indiferencia de la Iglesia respecto de las formas politicas", "Relaciones entre la Iglesia y el Estado", "Conflicto de deberes", "El Estado ateo", "Separación de la Iglesia y el Estado", "Las libertades de perdición", "La Escuela", "Divorcio", "Las órdenes Religiosas", "Secularizacion de Cementerios", "Iniracion del Concordato", "La condicion obrera" y "Conclusion". Como en los diferentes capitulos tratamos de los que exponian la doctrina eclesiastica sobre temas concretos, aqui nos referiremos únicamente a los de caracter mas politico o general.

En el pórtico del mensaje indicaban los prelados de Tarragona que cumplan con un "inexcusable deber" al manifestar su "acatamiento respetuoso" a los poderes de la nacion "en las horas solemnes e historicas de constituirse para organizar el nuevo regimen"; cooperaban de esta forma al bien publico, expresando el deseo de que, con "armonia y serenidad", fueran tenidos en cuenta todos los intereses en la labor que se emprendia, a fin de que el mayor numero de ciudadanos pudiera identificarse con su resultado. Hacian tal manifestacion no solo como ciudadanos que amaban a su patria sino tambien como obispos que habian de instruir a los fieles, toda vez que la obediencia a las autoridades terrenas era un imperativo de la fe cristiana, al proveer de Dios todo poder segun la doctrina propuesta por las

Escrituras y repetida fielmente por los pontífices; doctrina que tanto sobre este punto como sobre los demás que iban a abordar, querían ellos exponer "con la mansedumbre evangelica tan propia de los prelados, para que, sin lastimar a nadie, penetre suavemente en el fuero de las conciencias, sin excluir cualquiera solución de concordia que en su elevado criterio estimase prudente la Santa Sede a petición del poder constituido".

Tras exponer las conocidas enseñanzas de la "Immortale Dei" de León XIII respecto al indiferentismo ante las distintas formas de gobierno, insistían, tomando como ejemplo su propio acto de acatamiento, en que la Iglesia no podía ser "por su constitución misma, enemiga ni de los Estados, ni de ningún Régimen que sea justo y proceda justamente", pasando a continuación a analizar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Para iniciar el tratamiento de este tema señalaban los prelados que les había dolido una frase reciente del presidente del gobierno por la que expresaba su satisfacción de que el poder civil se alzase ahora independiente "de la coacción de la Iglesia"; la Iglesia, protestaban los obispos, "no coacciona ni puede coaccionar la libertad individual ni la pública", toda vez que, como había señalado León XIII en su encíclica "Immortale Dei", uno de cuyos párrafos transcribían, tan legítima era la autoridad civil como la eclesiástica en sus respectivas esferas, debiendo existir entre ambas la necesaria trabazón, de acuerdo con los ámbitos de sus respectivas soberanías y sus distintos y complementarios fines cerca de los hombres. Ahora bien, esta trabazón puntualizaban los obispos, debería darse, en todo caso, bajo el principio de la subordinación del poder civil en todo cuanto pudiera atañer al ámbito sobrenatural, "pues así como es razón que el cuerpo se subordine al alma y la felicidad temporal a la eterna, así lo es también que el Estado se subordine a la Iglesia en todo lo que atañe a la felicidad

eterna, de lo cual es unico y supremo juez la misma Iglesia, como sociedad de fin superior."

El olvido de esta insoslayable premisa por parte de los gobernantes era causa de que los catolicos se encontraran a veces en un conflicto de deberes entre la patria y la Iglesia, debiendo en tal caso recordar que, como Leon XIII señalaba en su "Sapientiae christianae", no podian nunca obedecer a las autoridades cuando ello implicara quebrantar las leyes divinas. Transcrita la doctrina pontificia aludian los prelados directamente al texto de la nueva norma suprema y a los problemas que de su anunciado contenido podian derivarse para los fieles, al tiempo que añoraban los tiempos de armonia entre los dos poderes:

"... ven los obispos con hondísima pena el semillero de conflictos que preparan los planes y proyectos que se anuncian para la futura Constitución, los cuales, rompiendo la armonia que reinaba entre la potestad eclesiastica y la civil, emancipan de toda religion al Estado, lo separan de la Iglesia, lo hacen superior a ella, y consagran las libertades que una voz augusta llamo de 'perdicion.'"

La raíz de tales males estaba, segun se señalaba en el epigrafe titulado "El Estado ateo", en lo expuesto por Leon XIII en la enciclica "Libertas", de la que se transcribia un extenso parrato en el que se exponia como lo que en el ambito de la filosofia defendian los naturalistas o racionalistas, defendian en el campo de la moral y la politica los autores del liberalismo teologico, sentando los principios de aquellos y pretendiendo, en consecuencia, la soberania absoluta de la razon humana con rechazo de la divina, haciendo al hombre juez supremo de la verdad; con ello determinaban que cada uno era ley para si, lo que producía la moral independiente, alejada de los mandatos divinos y cadora de una absoluta libertad. La consecuencia

de todo ello en la vida social era la negacion de todo origen sobrenatural de la misma, origen que pasaba a radicar en la libre voluntad de los individuos que la integraban: el poder publico no tenia mas origen que la multitud, "y, ademas, como en cada uno la propia razon es unica guia y norma de las acciones privadas, debe serlo tambien la de todos para todos en lo tocante a las cosas publicas. De aqui que el poder sea proporcional al numero, y la mayoria del pueblo sea la autora de todo derecho y obligacion". Esta clara descripcion de la mas pura teoria democratica era, segun Leon XIII, repugnante para la razon al negar todo tipo de vinculo entre el hombre o la sociedad civil y Dios "porque todo lo hecho tiene forzosamente algun lazo que lo una con la causa que lo hizo", debiendo dejarse gobernar lo inferior, segun la naturaleza, por lo que le es superior. Si, ademas, se dejaba a la razon humana el juicio de lo bueno y verdadero desaparecia la distincion entre el bien y el mal, al pasar a basarse tan solo en la opinion de cada uno, con lo que seria licito todo cuanto agradara, asi, "estableciendo una moral sin fuerza casi para contener y calmar los perturbados movimientos del alma, quedara naturalmente abierta la puerta a toda corrupcion". Sentado este negativo juicio sobre la madurez en el hombre agnostico y su posibilidad de reconocimiento y ejercicio de unos valores inherentes a la sociedad humana, que tan caro era a la doctrina eclesiastica de la epoca, pasaba el pontifice a enjuiciar la cosa publica:

"...la facilidad de mandar se separa del verdadero y natural principio, de donde toma toda su virtud para obrar el bien comun; y la ley, que establece lo que se ha de hacer y omitir, se deja al arbitrio de la multitud mas numerosa, lo cual es una pendiente que conduce a la tirania. Rechazado el señorío de Dios en el hombre y en la sociedad, es consiguiente que no haya publicamente religion alguna, y se seguira la mayor incuria en todo lo que se refiera a la Religion. Y, asimismo, armada la multitud con la creencia de su propia

soberanía. se precipitará fácilmente a promover turbulencias y sediciones; y, quitados los frenos del deber y de la conciencia, solo quedará la fuerza, que nunca es bastante a contener, por sí sola, los apetitos de las muchedumbres."

Con esta larga cita pretendían los prelados de Tarragona exponer lo más íntegra y suavemente posible la doctrina de la Iglesia, al objeto de que -a diferencia de lo que había hecho SEGURA- no se desprendiera de ella, aisladamente, la condena de la separación de la Iglesia y el Estado o la de la negación de todo poder de aquella, sino que se explicitara el por qué de esa condena, basada en los males que tanto al hombre aislado como a la sociedad civil podía acarrear, según la Iglesia, la negación de toda sujeción a un principio divino.

Descendiendo a mayor concreción para ceñirse al posible diseño de Estado que iba a plasmarse en la futura constitución, añadían los obispos que, para justificarlo y rechazar las transcritas enseñanzas de León XIII, se invocaba el ejemplo de las naciones extranjeras, lo cual no podía aceptarse por cuanto, en primer lugar, no era comparable una nación católica con otras en que coexistían diversas religiones y porque, además, no era cierto, como se pretendía, que todas las constituciones modernas establecieran que el Estado no tenía religión. Para demostrarlo analizaban en primer término la constitución alemana, con lo que, al tomarla como ejemplo, con abstracción de que la regulación de Weimar garantizaba la libertad de la religión católica precisamente porque no reconocía la primacía de esta ni de la protestante, no se pronunciaban, como tan rotundamente había hecho el cardenal SEGURA, contra la solución de considerar la Iglesia católica -a la que expresa, primaria y asiladamente se citaba en el artículo octavo del anteproyecto- como Corporación de Derecho público, ni contra la fórmula de la garantía del

libre ejercicio de la religión plasmada en el artículo duodécimo, pero sí que lo hacían contra el nuevo y duro proyecto ya dictaminado por la comisión parlamentaria presidida por JIMÉNEZ DE ASOA, que había sido enviado al presidente de las Cortes el día 18 de agosto y dado a conocer por la prensa en las fechas últimas de elaboración del documento de la provincia eclesiástica tarraconense,⁽³⁷⁾ toda vez que, a diferencia de aquél -que, como el anteproyecto, declaraba la no existencia de religión del Estado pero, mas allá que este,⁽³⁸⁾ remitía los actos de culto al interior de los templos, igualaba las confesiones religiosas al resto de las asociaciones y, sobre todo, anunciaba la disolución de todas las órdenes religiosas y la nacionalización de sus bienes-⁽³⁹⁾ La constitución alemana -decían los obispos- a pesar de la existencia de catolicismo

(37) Como indican BATLLORI y ARBELDA los días 18-21 de agosto fueron los dedicados a dar la redacción casi definitiva al texto que, fechado el 19 de agosto- festividad de San Magín, muy popular en Tarragona- una vez recibidas las observaciones y aprobaciones de los prelados de la provincia eclesiástica, sería publicado, siendo distribuido el día 29 a las altas dignidades políticas y eclesiásticas. Op. cit. págs. 142-144 y 244-247.

(38) Ver la nota núm. 11

(39) Los trabajos de la Comisión parlamentaria habían endurecido considerablemente los artículos destinados a regular la cuestión religiosa, siendo este el resultado de su trabajo en los aspectos que, de una u otra forma, afectaban a esta cuestión:

*PROYECTO DE CONSTITUCION

Diario de las sesiones de las Cortes Constituyentes, I, apéndice 42 al núm. 22
(18 de agosto de 1931)

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

«Art. 39. No existe religión del Estado

TITULO III

Derechos y deberes de los españoles

CAPITULO PRIMERO

Garantías individuales y políticas

«Art. 24. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a las leyes generales del país.

y protestantismo, señalaba "un progreso y una victoria

El Estado no podrá, en ningún caso, sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.

El Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes.

«Art. 25. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

Las confesiones religiosas sólo podrán ejercer sus cultos en sus respectivos templos, sin más limitaciones que las impuestas por el orden público.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República.

«Art. 32. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la censura previa.

En ningún caso podrá ser suspendida ni secuestrada la publicación de periódicos, ni recogida la edición de libros, sino en virtud de mandamiento de juez competente.

CAPITULO II

Familia, economía y cultura

«Art. 41. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso, por libre voluntad de la mujer o a solicitud del marido, con alegación, en este caso, de justa causa.

Los padres están obligados, respecto de sus hijos, a alimentarlos, asistirlos, educarlos e instruirlos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes.

Los hijos nacidos fuera del matrimonio tendrán los mismos derechos y deberes que los habidos dentro de él. Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad.

El Estado se obliga a proteger y asistir a la infancia y la maternidad.

«Art. 42. La propiedad de las fuentes naturales de riqueza, existentes dentro del territorio nacional, pertenece originariamente al Estado en nombre de la Nación.

El Estado, que reconoce actualmente la propiedad privada en razón directa de la función útil que en ella desempeña el propietario, procederá de un modo gradual a su socialización.

El Estado tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las transformaciones que convengan al interés público.

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social, que la ley definirá, determinando asimismo la forma de indemnización.

En los casos en que la necesidad social así lo exigiera, el Parlamento podrá acordar la procedencia de una expropiación sin indemnización.

Los servicios públicos y las explotaciones que afectan al interés nacional deberán ser nacionalizados en el más breve plazo posible.

No se impondrá la pena de confiscación de bienes.

católica, imponiendo el respeto a la verdad", lo que hacía

«Art. 43. Los tesoros artísticos e históricos de la Nación estarán bajo la salvaguardia del Estado, que podrá decretar las prohibiciones de exportación y enajenación que estimase oportunas para la defensa de los mismos.

«Art. 46. El servicio de la cultura nacional es atribución esencial del Estado. La enseñanza primaria se dará en la Escuela Única, que será gratuita, obligatoria y laica.

Los maestros nacionales tendrán el carácter de funcionarios públicos. La República lequiará en el sentido de facilitar a todos los españoles económicamente necesitados el acceso a las enseñanzas superiores, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. La libertad de la cátedra queda reconocida y garantizada en la Constitución. Se reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del Estado, a enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

«Art. 47. Al Estado corresponde exclusivamente expedir títulos profesionales y establecer los requisitos necesarios para obtenerlos. Una ley de Instrucción Pública determinará la edad escolar para los distintos grados, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en el precedente."

"El Debate" que, como el resto de la prensa, insertaría el texto íntegro del proyecto en su número del día 19 de agosto, publicaría, a la vez, un duro editorial bajo el título "El camino de México" en el que indicaba que, prescindiendo de Rusia, la constitución que se preparaba era, en el aspecto religioso, "la más radical y sectaria de Europa", toda vez que, comenzando por la afirmación democrática contenida en el artículo primero, "cuyo texto envuelve una paladina negación del origen divino del poder", todo el proyecto venía inspirado por un claro principio laico al establecer no ya una simple neutralidad religiosa, sino el total rechazo de religión del Estado y su total desvinculación de cualquier Iglesia con lo que se iba directamente a la supresión del presupuesto del culto y ciero olvidando las obligaciones morales y contractuales que pesaban sobre el Estado español. El proyecto, así, no se limitaba a negar el carácter divino de la Iglesia y a desconocer su naturaleza de sociedad perfecta, buscaba, además "su aniquilamiento material".

Así, respecto a las órdenes religiosas el texto, que declaraba la igualdad de todos los españoles ante la ley, establecía "un régimen odioso de excepción" al prever su disolución y la incautación de sus bienes; respecto al culto se pasaba a recluirlas al interior de los templos, como si el Estado, que permitía manifestaciones violentas de los enemigos del orden social, no pudiera permitir las procesiones, que tomaban parte de la esencia del pueblo; con relación a la familia el proyecto buscaba su destrucción al prever el divorcio "sin necesidad de justificación por parte de la mujer", al establecer la "igualdad de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos" y al negar el vínculo sagrado; en cuanto a la enseñanza su regulación venía a completar la ofensiva contra la Iglesia y la familia al pretender instaurar "el mito de la Escuela Única, con todos sus

-se recogía textualmente- al poner "bajo la protección del

caracteres de obligatoria y laica", lo que suponía la negación de los derechos de la Iglesia y de los padres y la "instauración de un monopolio docente encaminado a la total deschristianización de las generaciones venideras", ya que la concesión que se hacía a las "confesiones religiosas" respecto a enseñar sus correspondientes doctrinas era bajo la inspección del Estado, cuyas facultades discrecionales podían anular tal derecho en la práctica.

Todo ello, continuaba el periódico, era prueba del carácter "ultrasectario" del proyecto de constitución que, de aprobarse por las Cortes, "sería una verdadera ley de persecución", tal como aconteció en Méjico; pese a lo cual la opinión católica permanecía pasiva, como si no advirtiera que llegaban "días de peligro inminente para la Iglesia", razón por la que concluía llamando a la acción a todos los creyentes:

"Es hora de actuar con la máxima actividad y energía dentro siempre de la legalidad. No ya los días, sino las horas son preciosas. Hay que dejar el descanso, y acortar los veranos. Es indispensable organizar una intensa campaña por toda la nación, para despertar a la opinión adormecida. «Estamos frente a un dictamen de una Comisión parlamentaria. No creemos que el Gobierno lo haga suyo. Pero el Gobierno y los diputados que lo combatan necesitan una opinión en que apoyarse. ¿Es que los católicos españoles vamos a ver impávidos la persecución religiosa que se avetina?»"

Pese a la falta de reacción por parte de los católicos que denunciaba el editorial, el mismo número de "El Debate" daba la opuesta noticia, que venía a secundar las instrucciones impartidas por el nuncio, de que en Burgos se iniciaba la propaganda frente al proyecto de constitución con la celebración de "un acto de afirmación católica" organizado por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y por la Acción Católica de la localidad, en el que Ángel Herrera pronunciaría la conferencia "Los católicos ante el anteproyecto de Constitución". Según la reseña el acto no tendría carácter político y sería el primero de una serie que se organizarían en la provincia "para defender los derechos de los católicos amenazados de persecución en el proyecto anticonstitucional [sic] como preparación a una asamblea general, esperándose de todo ello que el movimiento prendiera en las demás provincias castellanas. El cronista concluía puntualizando que al confiar la opinión en que el gobierno no haría suyo el "anteproyecto" era deseo de los organizadores "que en todos los actos aparezca el sentido gubernamental y ciudadano del movimiento" y añadiendo que a la conferencia a celebrar serían "invitadas las señoras, las cuales, según la Constitución, tendrán derecho al sufragio, por lo que serán de hoy en adelante un elemento importantísimo en la vida política", frase que, aunque inexacta en su formulación al aludir a algo que no estaba plasmado más que a nivel de proyecto, es un ejemplo de la estrategia que iniciaban los movimientos católicos tan ocupados hasta entonces en resaltar la importancia de la participación masculina, como ha quedado patente en las reseñas de las procesiones a que hemos aludido anteriormente (véase la nota 88 del capítulo "La Iglesia ante la República") o se desprende fácilmente de las expresiones de muchos escritos del episcopado comentados, preocupados ahora del tema del voto de la mujer que después, y precisamente por el tópico de su posible mayor vinculación al ámbito religioso, tanto sería debatido en las Cortes. ("El Debate", 19 de agosto de 1931).

Estado el libre ejercicio de la Religión" (art. 135), al

A los cuatro días de la publicación del editorial y noticia comentados volvería "El Debate" a hacer una nueva crítica de carácter global relativa al tratamiento de la cuestión religiosa en el proyecto de constitución por medio de un editorial titulado "Contra las normas del Derecho Internacional". En él, y basándose en el contenido del artículo séptimo ("El Estado español acatará las normas universales del Derecho Internacional, que reconoce como parte integrante de su derecho positivo"), denunciaba la existencia de una contradicción que las Cortes habrían de enmendar, ya que, glosando párrafos del Reglamento del Tribunal de Justicia de La Haya y de resoluciones de la Sociedad de Naciones relativos a la garantía de los derechos de las minorías por parte de los Estados, así como de la doctrina sentada por el "Instituto de Derecho Internacional" en su "Declaración de Derechos Internacionales del Hombre" de 1929, según la cual se determinaba el deber de todo Estado de reconocer el derecho de todos sus súbditos a la vida, a la libertad, a la propiedad y, también, al ejercicio público y privado de la religión, denunciaba que, pese a la existencia del artículo citado, el proyecto constitucional era, ya de por sí, contrario a los principios internacionales enumerados y ello "Con el agravante de que los atropellados en sus derechos no son una minoría, una clase, es la misma sociedad española. Porque se desconocen los derechos de propiedad privada, el de la libertad de enseñanza, el derecho de asociarse para fines lícitos, el del libre y público ejercicio del culto dominante, casi exclusivo del país...". Tales derechos eran desconocidos, singularmente, por los artículos que el editorial pasaba a enumerar comentando su contenido desde el primer de los atentados que en todos ellos se hacían a los derechos de la Iglesia:

"El art. 42 viola el derecho de propiedad privada, al prescribir que el Estado procederá gradualmente a su nacionalización. Aun más lo viola el art. 24 cuando ordena que el Estado procederá a la nacionalización de los bienes de las Ordenes religiosas atropello que alcanza, no sólo a los religiosos mismos, sino a sus parientes y allegados, a sus bienhechores y donantes...

"El mismo art. 24 ataca a fondo el derecho natural de asociarse para fines lícitos, preceptuando la disolución de las Ordenes religiosas; con la arbitraria e irritante desigualdad de que en el art. 37, concede a todos los españoles el derecho de asociarse y sindicarse libremente para los fines de la vida humana.

"El art. 46 desconoce el derecho de la libertad de enseñanza, y niega a toda la sociedad española, a todas las familias españolas, el derecho a dirigir la educación de sus propios hijos y de escoger a sus educadores; imponiendo a todos la escuela única y laica, y reservándose la facultad de autorizar o no autorizar la enseñanza de los establecimientos privados.

"Finalmente, la libertad del culto religioso, precisamente del culto dominante, casi exclusivo, en la sociedad española, queda desconocido y violado, con la desecristianización del Estado (art. 39), la exclusión del culto religioso en el templo (art. 25), con la prohibición de todo auxilio económico a la Iglesia (art. 24), con la intromisión en la enseñanza religiosa dada en los mismos establecimientos eclesiásticos (art. 46)...

"Vea, pues, la Asamblea Constituyente cómo ha de enmendar esa... "distracción" de la Comisión dictaminadora, y poner la futura Constitución un poco a tono con las normas universales del Derecho Internacional."

("El Debate", 23 de agosto de 1931).

declarar que deja "a toda sociedad religiosa que administre libremente sus bienes, y la reconoce capacidad para personalidad jurídica" (art. 137) y al ofrecer el Estado "la garantía absoluta de los inmuebles de las Asociaciones religiosas" (art. 138). La constitución polaca, por su parte, comenzaba invocando a Dios y dándole las gracias por el establecimiento de la República, y su presidente, al igual que hacía el de Hungría, juraba en su nombre fidelidad a las leyes del Estado; la norma suprema determinaba, dada la evolución de su historia religiosa, la libertad de cultos, pero el Estado concedía a las corporaciones religiosas su libre y jurídica función con facultad de poseer ilimitadamente, reconocimiento que se encontraba ampliamente formulado en todas las constituciones de países protestantes y cismáticos; Rumanía declaraba "Iglesia dominante en el Estado a la Iglesia rumano-ortodoxa, y da la primacía sobre los otros cultos a la greco-católica" (art. 35); Grecia asimilaba como religión nacional a la greco-ortodoxa y, acababan señalando los obispos, en lo que, o ha de considerarse una falacia al referirse a una premisa que poco tenía de real, o ha de entenderse como una rotunda prueba de la falta de visión histórica de la Iglesia de la época, "el fascismo italiano se erigió en Estado 'para servir a Dios y a la patria'".

En los planes sobre la futura constitución española reinaba, según se deducía de la prensa, un espíritu opuesto al del constitucionalismo de los demás países que, en casos, como el de Weimar, encerraba un espíritu innovador y progresivo en favor del catolicismo y en otros, como en el de los países orientales, era respetuoso y conservador de sus tradiciones. "Por esta desviación de los principios inviolables del derecho y de nuestra historia -concluyen los prelados-, nuestra Constitución rompería con la vida nacional profunda y verdadera del país, con las tradiciones seculares que han formado y modelado el alma de nuestros

pueblos, y pondría en pugna al individuo con el Estado"; y no sólo ello puesto que también rompería "con la tradición de todos los pueblos, aun de los poco civilizados" ya que ¿había existido nunca un pueblo que, como tal, excluyese la religión?

A una nueva variante doctrinal, más moderada que la que propugnaba el ateísmo del Estado, iban a referirse a continuación los obispos al abordar en un nuevo epigrafe el tema de la separación entre aquél y la Iglesia, para lo que comenzaban apuntando como había quienes, viendo las nefastas consecuencias de las sociedades sin religión, propugnaban la primacía de esta en el ámbito privado, pero para negarla en el público, doctrina que había sido rechazada también por León XIII -basándose en que era obligación del Estado el procurar a sus subditos todos los bienes, singularmente los espirituales, a cuyo objeto nada había mejor que atenerse a las leyes divinas, bajo riesgo de desviarse de sus fines y de los dictados de la naturaleza-, por Pío X y por Pío XI, que en el "Syllabus" condenó tanto la proposición que defendía la separación de la Iglesia y del Estado como la que pretendía que aquella no era una sociedad perfecta, libre y con propios derechos de origen divino.

Pasaban a continuación los obispos a hablar de lo que la Iglesia había definido como "libertades de perdición", señalando que, a la vez que se negaban los derechos de Dios y de la Iglesia, se quería privar a los ciudadanos de una de sus más preciadas libertades, cual era la de elegir la escuela de sus hijos; proclamándose, contrariamente, derechos y libertades reprobables por aquella; frente a ello apuntaban que León XIII había recordado que no podía concebirse la libertad humana sin sujeción a la voluntad divina, negar lo cual no era condición del hombre libre, "sino del que abusa de su libertad para rebelarse (Enc. 'Libertas')"; pensamiento en el que abundaban si

transcribir, al igual que habia hecho el cardenal SEGURA, el parrafo de la enciclica en el que el pontifice habia declarado la ilicitud de "pedir, defender, conceder la libertad de pensar, de escribir, de enseñar, ni tampoco la de cultos, como otros tantos derechos dados por la naturaleza al hombre. Pues, si los hubiera dado en efecto, habria derecho para no reconocer el imperio de Dios, y ninguna ley podria moderar la libertad del hombre".

El parrafo completo transcrito en el mensaje y del que el documento de 25 de julio tan solo recogia la parte que hemos dejado reseñada -y de ahí la queja de que el primado habia expuesto parcialmente la doctrina pontificia- habria, no obstante, una puerta a la rigidez de los principios apuntados, rigidez que resulta incomprensible desde el prisma de una valoracion humana consciente del limite de su albedrio en el libre ejercicio de los derechos de los demas y cuya matizacion por el propio Leon XIII habia sido obviada, como hemos dicho, por SEGURA:

"Siguese tambien que, si hay justas causas, podran tolerarse estas libertades, pero con determinada moderacion, para que no degeneren en liviandad e insolencia. Donde estas libertades esten vigentes, usen de ellas para el bien de los ciudadanos, pero sientan de ellas lo mismo que la Iglesia siente. Porque toda libertad puede reputarse legitima, con tal que aumente la facilidad de obrar el bien; fuera de esto, nunca".

Queriendo ahondar en la "tolerancia", como, destacado en bastardilla, decian los obispos, continuaban transcribiendo las palabras de la enciclica -a las que calificaban de "prudentes observaciones" sobre las antedichas libertades- relativas a la consideracion maternal de la Iglesia acerca de la humana flaqueza, y por la que "sin conceder el menor derecho sino solo a lo verdadero y honesto", admitia que la ley humana pudiera tolerar el mal,

mas sin aprobarlo ni quererlo, con tal de evitar un mal mayor o de lograr mayor bien.

Cifándose ya al tratamiento concreto de temas específicos sobre cuya regulación previsiblemente incidiría el nuevo texto constitucional, el mensaje pasaba a referirse seguidamente a "La Escuela", el "Divorcio", "Las ordenes Religiosas" y la "Secularización de Cementerios" -temas todos ellos de los que tratamos en los respectivos capítulos-⁽⁴⁰⁾ para aludir a continuación a la problemática derivada de la "Infracción del concordato", título con el que se iniciaba el penúltimo epígrafe del documento y que comenzaba lamentando su incumplimiento tanto "por lo que se ha hecho como por lo que se teme", resaltando que era con-

(40) Como ha quedado expuesto en la "Introducción" los límites de esta investigación se cifan al análisis de la postura de los distintos miembros del episcopado ante la legislación de la Segunda República que tenía por principal objeto la modernización de una sociedad anclada en ideologías del pasado, razón por la que excede de su planteamiento el análisis de aquella normativa dictada para incidir directamente en los medios personales y materiales de la Iglesia. Por este motivo el análisis de la cuestión de las órdenes religiosas cae fuera del ámbito estudiado. No obstante, a fin de dar una visión global del contenido del mensaje de la provincia eclesástica de Tarazona a las Cortes constituyentes indicaremos que los prelados de dicha provincia arduan al referirse a este tema, dado que la opinión pública más progresista esgrimía el ejemplo del constitucionalismo occidental como argumento para incorporar determinadas regulaciones en la futura constitución española, que muchas de tales constituciones obligaban al Estado a tutelar las corporaciones religiosas, reconociéndoles personalidad jurídica y capacidad para poseer y administrar sus bienes, y, si tal se hacía en esos países igual debiera hacerse en España, máxime cuando las órdenes religiosas habían contribuido a la gloria de su historia y, en el presente, servían de tal forma al bien común "que su disolución equivaldría a un desastre". Este "desastre" se viviría principalmente en el ámbito de la enseñanza, "cuando faltan colegios para los hijos del pueblo".

"¿Se quiere lanzar al arroyo, para su perdición, a ese millón de niños que educan los Religiosos y Religiosas en sus escuelas primarias, a esos centenares de miles de hijos de obreros que de ellos y de ellas reciben instrucción gratuita en escuelas diurnas y nocturnas, patronatos y oratorios, escuelas dominicales o profesionales y técnicas; instituciones donde, además de la instrucción y educación, las hay que introducen a los alumnos en la práctica de las obras sociales, del ahorro infantil, de las

trario a lo en él estipulado "el ateísmo del Estado español y las consecuencias que de él se derivan", por lo que venía a incumplirse lo solemnemente pactado. Frente a ello los obispos esperaban que las Cortes constituyentes respetaran

mutualidades escolares y otras; o dan una formación profesional, que en algún caso no tiene rival en España y puede sin sonrojo sostener la competencia con las naciones extranjeras?

«Y todo esto lo hacen con sus propios medios, con gastos cuantiosos; muchos, sin apoyo de las autoridades públicas; otros, con subvenciones mezquinas; ahorrando de este modo fabulosas cantidades al presupuesto anual de Instrucción Pública, e insoportables cargas a los contribuyentes.

«Por el nombre de muchos individuos de esas Órdenes y Congregaciones Religiosas, por sus instituciones y obras de cultura; colegios de segunda enseñanza, en que instruyen a millares de adolescentes, centros de enseñanza superior, eclesiástica o civil, observatorios, libros, revistas, el nombre de España es celebrado entre los sabios del mundo, respetado en los congresos internacionales y científicos, honrado en las universidades y academias.»

Junto a ello sería también extremadamente grave el daño que se causaría en los hospitales, donde difícilmente se hallarían sustitutos para la labor realizada por religiosas y religiosos en todos los ámbitos: "...en los hospitales civiles, militares y de la marina, en las clínicas, dispensarios y farmacias, en las cárceles y reformatorios, en los institutos de ciegos y sordomudos, en los asilos, hospicios, casas de caridad, incluso, en los manicomios y leproserías, en tantas obras, en fin, que anima el soplo insustituible de la caridad cristiana", siendo, en definitiva, unos "bienhechores incomparables de la humanidad", a los que, precisamente, se quería ahora "arrojar y disolver como detrito de la nación".

Esta disolución, además, sería una injuria para las almas que buscaban enseñanza y consuelo en los miembros de las órdenes religiosas, a las que se privaría, con su supresión, de los bienes espirituales que de ellas recibían.

"Pero además, la persecución es de todo punto injusta. Pues, ¡qué!, ¿no son los religiosos, ciudadanos como los demás, con derecho de asociarse para todos los fines lícitos de la vida? ¿qué tan más lícito que renunciar a los bienes y comodidades de la carne y del mundo, para consagrar toda la vida al provecho del prójimo, a su felicidad eterna en primer lugar, pero también a su felicidad temporal?" ¡Inocente contradicción y burla sangrienta, que mientras se abren todas las esclusas para el mal, concediéndole el máximo de libertades solo para el bien, para la virtud y para la virtud más heroica se forjan cadenas y dictan proscripciones!"

La persecución era indicio de "atraso mental", del que renegaba el mundo civilizado, "tanto que no falta nación perseguidora un tiempo, que devora actualmente la escurra del paso mal dado... Busca de varios modos desandarlo, como de hecho lo desanda".

el acuerdo suscrito, habida cuenta de que, si era preciso modificarlo, en su articulado se preveía el acuerdo de ambas partes cuando surgieran dudas o dificultades y de que el papa había celebrado muchos concordatos, "aún con naciones cismáticas o heréticas".

Finalmente, y tras aludir a la también concreta cuestión de "La condición obrera",⁽⁴¹⁾ el mensaje se cerraba con una "Conclusión" en la que los prelados aducían que con sus palabras habían interpretado el sentir de la mayoría de los españoles y expresaban su dolor ante la posibilidad de que la República -para la que imploraban las bendiciones del cielo- iniciase su historia, "que sabiamente gobernada pudiera ser gloriosa", creando como base de su derecho una constitución que ignorase a Dios, lo cual equivaldría a negar la alta tradición consustancial al devenir del pueblo español, que protestaría del despojo de los derechos de la Iglesia y de los de los padres, al privarles de la libertad de formar a sus hijos como les correspondía "por ley natural, anterior y superior a todas las leyes positivas."

Y, así, la comunidad internacional, firme tras la guerra europea, proclamaba los derechos fundamentales humanos, tanto de los individuos como de las colectividades, "sin excluir a las religiosas", imponiendo las potencias aliadas a los Estados soberanos "el respeto de los derechos de las minorías étnicas o religiosas, que viven en su gremio, a saber: la protección de la vida y de la libertad, el libre ejercicio de la religión, la igualdad de los derechos civiles y políticos, el uso de la lengua materna, la libertad de enseñanza y la de usar y dirigir instituciones religiosas, caritativas y sociales", imposición con la que habían hecho consonancia los principios sustentados por la Academia Diplomática Internacional y el Instituto de Derecho Internacional,

Por todo lo expuesto, y como colofón de sus consideraciones, las palabras finales de los prelados no dejaban de contener un advertencia que, sabían, era de las que más directamente podían hacer mella en el ánimo del poder civil:

"Gran desgracia sería para nuestra patria que la comunidad internacional pudiera erigirse justiciera contra ella, por haber ignorado y conculcado los derechos más elementales de la vida humana y de la verdadera civilización".

(41) Ver la nota 363 del capítulo "La Iglesia ante la República".

Ante la posibilidad descrita, los obispos deseaban, por el contrario, que, dado todo el respeto y obediencia que merecía la autoridad civil, también la Iglesia gozara de la dignidad y libertad que le eran consustanciales; que las leyes dejaran intacta la regulación del matrimonio en pro de la estabilidad de las familias, "núcleo y germen de la sociedad", toda vez que "las virtudes o los vicios de la familia" eran "las virtudes o los vicios de un pueblo"; que las órdenes religiosas fueran respetadas, recordándose cuanto habían hecho por el pueblo, y que las leyes tutelaran los derechos de la propiedad y el trabajo, abriendo paso a la justicia y a la caridad al velar "por la inteligencia y por todas las necesidades del obrero."

Expresados tales deseos los obispos, exponiendo sus convicciones y las que entendían eran las de la generalidad de los ciudadanos, elevaban su queja por cuanto en aquellos días se manifestaba y difundía en contra de los principios que acababan de defender:

"...protestamos de los sofismas que contra Dios, contra la Iglesia, contra la autoridad temporal, contra la familia y la propiedad se han pronunciado en discursos y en artículos de periódicos, sin respeto a intereses que son superiores, sin estima por la dignidad de la palabra y del pensamiento."

Por último, antes de acabar su escrito proclamando la soberanía divina sobre los pueblos y sus gobernantes, que de ella recibían su autoridad, siendo la fuente de todo derecho, los prelados de la provincia eclesiástica de Tarragona no dejaban de volver sus ojos hacia los problemas singulares de su región exponiendo ante las Cortes los anhelos del pueblo catalán:

"Deseamos, como Prelados de las Diócesis de Cataluña, donde algunos hemos nacido, donde todos vivimos y percibimos, cual corresponde a Padres carifiosos, los latidos de su corazón, que le sean otorgadas todas aquellas libertades compatibles con la solidaridad española forjada por la historia, por la etnografía, por la convivencia y por el afecto mutuo, y que esto se realice con la efusión y cariño propios de corazones verdaderamente fraternales, que se buscan y saben con placer encontrarse y comprometerse. Nuestro anhelo como catalanes y como españoles es anhelo de paz, de concordia, de armonía, como corresponde al sagrado ministerio que nos ha sido confiado. Como Pastores de este pueblo, al cual amamos entrañablemente, sentimos como nuestras sus alegrías y sus dolores, y hacemos nuestra su voluntad cuando en nada se oponga al derecho ni a la moral." (42)

-
- (42) El "Mensaje de los Prelados de la Provincia Eclesiástica Tarragonense a las Cortes Constituyentes" viene íntegramente reproducido en *"Església i Estat durant la segona República espanyola, 1931-1936"*, I, págs. 224-244. Fue publicado, fechado el 19 de agosto, como separata del BOE de Tarragona núm. 18 de 15 de septiembre de 1931, tras la publicación ya efectuada por el boletín eclesiástico de Tortosa que se había realizado con fecha 7 de septiembre (BOE de Tortosa, año 73, 7 de septiembre de 1931, núm. 15, págs. 284-304).

La publicación efectuada por el boletín de Tarragona iba precedida de una circular del arzobispo de 8 de septiembre insertada en el ejemplar en la que indicaba a los párrocos que, con él, recibirían dos separatas del Mensaje, del que recomendaba la atenta lectura por todos los diocesanos a fin de que, habidos de la doctrina expuesta en él, acomodaran a ella su actuación, habida cuenta que en el documento se trataban los puntos doctrinales de mayor actualidad; acatamiento al Poder civil en sus diversas formas políticas, deberes del Estado y sus relaciones con la Iglesia, libertad de cultos, escuela laica, divorcio, condición social de los obreros, etc., temas en los que el cardenal VIDAL se apoyaba para recomendar, siguiendo las instrucciones del Vaticano, la actuación de los católicos en defensa de todos ello, si bien en una línea más concisa y vaga que, como veremos más adelante, seguirían otros preladados:

"El simple enunciado de tales asuntos da ya a entender la gravedad de los actuales momentos, y son fáciles de comprender las importantes derivaciones que pueden seguirse en el orden religioso, social y familiar de nuestra Patria. Por tanto, a nadie es lícito mostrarse indiferente a la solución que les pueda caber: antes al contrario, son de esperar de todo buen cristiano los máximos esfuerzos en sus respectivas esferas de actuación, para que sean respetados los principios de nuestra religión sacrosanta, así como los de la familia y de la sociedad,

Una vez redactado el mensaje y previamente a su publicación en los boletines eclesiales de las diócesis de la provincia eclesial tarraconense, el cardenal VIDAL

«En uno u otro sentido todos podemos y debemos aportar nuestro concurso, y tratándose del bien común no hemos de detenernos ante los sacrificios o generosidades que sean necesarios. Esperemos por la propia reforma del espíritu, cuando hubiere negligencia en el cumplimiento de los deberes individuales, sea en el orden religioso como en el social.»

Tras estas exhortaciones el prelado recomendaba la oración, singularmente el rezo del rosario, a cuya práctica la Iglesia destinaba el mes de octubre y, a tal fin, acababa estableciendo diversos actos de culto amen de dictar las oportunas instrucciones acerca de la lectura del Mensaje a los fieles.

En los restantes boletines de la provincia eclesial tarraconense consultados se incorporó en las siguientes fechas:

- BOE de Gerona, año 75, 26 de septiembre de 1931, núm. 12, págs. 420-423 y separata. El texto publicado en el boletín, siguiendo la pauta del arzobispo, era una circular de 24 de septiembre del Dr. José VILA y MARTÍNEZ en la que indicaba que al no haberse podido insertar antes el mensaje se hacía ahora en forma de separata a fin de que fuera divulgado y detenidamente conocido por clero y fieles "para compenetrarse más y más con el sentir de la Iglesia y de sus Prelados" y a la que incorporaba los párrafos que acabamos de transcribir de la del cardenal VIDAL, para acabar exhortando a la oración dadas "las atíacas circunstancias que nos afectan en estos días y momentos históricos de gran trascendencia para la Religión y la Patria" a cuyo efecto establecía diversos actos de culto.
- BOE de Urgel, año 76, 1 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 315-316 y separata. Al igual que el boletín eclesial de Gerona, el de Urgel incorporaba al boletín un escrito del obispo Dr. Justino GUIART señalando la publicación del mensaje como separata de ese número y, como había hecho el Dr. VIDAL, haciendo una breve glosa del mismo, al apuntar que en el se exponía "con sólidos razonamientos y abundante documentación, la doctrina católica sobre cuestiones de preferente actualidad, tales como las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las libertades modernas, justamente llamadas libertades de perdición, la escuela laica y el monopolio escolar en manos del Estado ateo, el divorcio, las Ordenes religiosas, la condición social de los obreros, etc." razón por la que recomendaba a todos los sacerdotes, y especialmente a los que actuaban cerca de los fieles, la detenida lectura del mensaje a efectos de su debida transmisión.
- BOE de Vich, año 77, 31 de octubre de 1931, núm. 2084, págs. 538-562 y 16 de noviembre de 1931, núm. 2085, págs. 555-564 (conclusión).

lo envió al presidente de las Cortes,⁽⁴³⁾ al del gobierno, a todos los ministros,⁽⁴⁴⁾ al Secretario de Estado vaticano, al nuncio⁽⁴⁵⁾ y a todos los metropolitanos.⁽⁴⁶⁾ A pesar de los buenos augurios expresados por los príncipes de la iglesia

Hemos de indicar, por último, que en la colección consultada del boletín eclesiástico de Barcelona no hemos localizado el mensaje de los prelados tarraconenses por lo que es de suponer que, al igual que en otras diócesis, se editó en ella en forma de separata aunque, a diferencia de aquellas, sin alusión alguna en el número correspondiente del boletín. Por BATLLORI y ARBELLOA sabemos que por carta del 24 de agosto del Dr. IRURITA al cardenal VIDAL le informaba que lo insertaría en el boletín del mes de septiembre (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pág. 247)

- (43) En la carta de remisión, de 22 de agosto, el cardenal indicaba a Julián BESTEIRO que en el texto se exponía la doctrina católica en su integridad, y que era "mensaje de paz" en el que se expresaba el deseo de revelar el ánimo de concordia que siempre había de llenar el corazón de los ministros de Evangelio, "de forma suave... sin ánimo de causar la menor molestia", anhelando que ese espíritu de caridad se extendiera por la Cámara, a través de su presidente, "para que todos podamos contribuir, en la medida de nuestras fuerzas, a la mayor obra que España espera de la Asamblea; obra que será tanto más duradera y eficaz, cuanto más se respeten la constitución interna y las tradiciones gloriosas de nuestra España". Julián BESTEIRO acusó recibo del mensaje el 1 de septiembre agradeciendo las frases de la carta del cardenal y señalándole su genérico propósito "de amparar con toda energía la expresión razonada de cualquier ideal noblemente sentido" al objeto de alcanzar "el imperio de una era de paz en que laboren, cordialmente comprometidas, todas las fuerzas sociales de España" (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 248-249 y 271-272).
- (44) Según indican BATLLORI y ARBELLOA por testimonio del Dr. VILADRICH se conoce este envío si bien tan sólo acusaron recibo ALCALA ZAMORA y LARGO CABALLERO. Aquél por una tarjeta sin fecha agradeciendo simplemente el envío, este por escueta carta de 1 de septiembre en la que indicaba que leería el documento "con toda atención." (*Op. cit.*, I, págs. 271, nota 5 y 272).
- (45) Por escrito de 2 de septiembre TEDESCHINI encomiaba el mensaje calificándolo de "sobrio, prudente, alto y diplomático" por lo que estaba seguro de que "producirá efectos e impresiones de mucho fruto y de sólido prestigio" (*Op. cit.*, I, pág. 273).
- (46) El cardenal ILUNDAIN acusaría recibo el 10 de septiembre expresando a VIDAL el agrado con que había leído el mensaje que, a su juicio, estaba "redactado con aplomo y con argumentos poderosísimos". En el Archivo del cardenal VIDAL sólo constan otras dos cartas de metropolitanos sobre el mensaje: la del arzobispo de Zaragoza, Dr. Rigoberto DOMENECH de 31 de agosto, que lo calificaba de "sólido, muy equanime y muy bien escrito", aunque añadiendo que en esa provincia se limitaban a "algún acto de afirmación católica y telegramas, acompañados de

respecto a su contenido lo cierto es que, como señalan BATLLORI y ARBELLOA, "los frutos no correspondieron a la acogida", ya que "el único parlamentario que comentó este mensaje en las Cortes fue el diputado de Esquerra Republicana Catalana por Lérida, H. TORRES, y solo para recalcar que no había ninguna diferencia entre la doctrina de VIDAL y la de los restantes obispos españoles".⁽⁴⁷⁾

oraciones" ya que, según él, discrepando totalmente del parecer del cardenal VIDAL, "si [el mensaje] se repitiera en esta u otra Provincia, temo había de exacerbar los ánimos y ser contraproducente"; y del arzobispo de Valladolid, Dr. Remigio SANDÁSEGUI, que felicitaba a VIDAL por el documento, que juzgaba "excelente, discreto y oportuno" (Op.cit., I, págs. 301-302; 269-270 y 276).

(47) Op. cit., I, pág. 144.

4.2. *El mensaje de la provincia eclesiástica de Sevilla.*

En carta de 10 de septiembre de 1931 el cardenal ILUNDAIN comunicaba al arzobispo de Tarragona que habia recibido el ejemplar que le remitiera del mensaje elevado por esta provincia eclesiastica a las Cortes constituyentes y, tras alabar su contenido, le indicaba que habia pedido el parecer de sus sufraganeos para hacer algo similar con lo que, al manifestar su acuerdo, habian dirigido tambien un mensaje de su provincia a las Cortes que, aun siendo *mas* conciso que el de Tarragona, tendia al mismo objeto.

El mensaje, techado, como el escrito por el que era enviado al presidente de las Cortes constituyentes, el 4 de septiembre de 1931, era, en efecto, mucho *mas* breve que el redactado por la provincia eclesiastica de Tarragona por lo que, a diferencia de aquel, no se articulaba en epigraes de tratamiento monografico de los diversos temas que, incluidos en la regulacion a abordar por el futuro texto constitucional, eran de interes para la Iglesia; otra cuestion de forma que tambien lo diferenciaba de aquel era que solo venia suscrito por el arzobispo de Sevilla, que lo elevaba a las Cortes en su nombre y en representacion de sus sufraganeos; por ultimo, y siendo esta quizá la *mas* importante diferencia con el documento tarraconense, el escrito de la provincia eclesiastica de Sevilla hacia alusion directa al "Proyecto de Constitucion que ha sido presentado por la Comision Parlamentaria, y ya está discutiendose en su totalidad", sobre el que comenzaba pidiendo sin rodeos, aunque en terminos de "respetuoso ruego y suplica", que se modificaran o eliminaran algunos de sus articulos en razon a "que no dejan a salvo los derechos de

la religión y de la Santa Sede católica que profesan la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles", enfoque este que, como hemos visto, el cardenal VIDAL había querido evitar y que el Dr. ILUNDAIN adoptaba, dando al documento un carácter mucho más enérgico y directo, por la probable razón de la fecha en que lo enviaba a unas Cortes ya entonces inmersas en la discusión del proyecto.

Mas no era sólo la forma en que el mensaje de la provincia eclesiástica de Sevilla se manifestaba directamente sobre el proyecto de constitución lo que hacía a este más contundente que el de Tarragona, la dureza del escrito radicaba también en su contenido. Comenzaba así el cardenal ILUNDAIN aludiendo a la gravedad de la letra y el espíritu del artículo 32, que al proclamar el ateísmo del Estado obviaba el hecho de que "cuando el Estado prescinde absolutamente de Dios y de la religión deja incumplida la obligación máxima de acatamiento a la Divinidad, propia de todo ser jurídico y persona física y moral", infiriéndose, además, "grave daño a la potestad suprema política", toda vez que, según el tradicional principio eclesiástico, su origen provenía de Dios al que rendían obediencia los hombres al someterse a las leyes de las potestades humanas.

Igualmente grave era el contenido del artículo 24 del proyecto que, de ser aprobado por las Cortes, causaría a la Iglesia "lesión en sus más fundamentales y esenciales derechos, en su misma personalidad jurídica", ya que, en razón a su origen divino, tenía "caracteres de sociedad necesaria, sobrenatural, universal, suprema en su orden y esfera propia", por lo que no podía ser equiparada a asociaciones fundadas por los hombres para fines temporales, respecto a las cuales era superior, poseyendo derechos de "sociedad perfecta y suprema sobrenatural inalienables" que debían ser respetados; daber este de respeto que el Dr. ILUNDAIN quería fundamentar no sólo en las características

que acababa de dejar apuntadas y que, como reiteradamente habian argumentado otros prelados, eran, o debian de ser, desde el punto de vista eclesiástico, suficientes, sino tambien en la menos trascendente esfera de las simples relaciones humanas, al añadir que ello debia hacerse en la misma forma en que tanto la Iglesia como sus prelados se esmeraban "en reconocer los legítimos derechos de la sociedad civil y de sus Gobernantes y los deberes de obediencia debida a estos en su propia esfera".

Continuando en la crítica del artículo 24 -aunque sin hacer comentario alguno del contenido de su párrafo segundo, que implicaba, de ser asumido por el parlamento, la supresión futura del presupuesto del culto y clero- pasaba el cardenal a referirse a las ordenes religiosas mas sin clara alusion a la posibilidad de su total disolución y consiguiente nacionalización de sus bienes que el párrafo tercero de la norma contemplaba, señalando, simplemente la aprobacion y bendicion por parte de la Iglesia que tenían todas las congregaciones religiosas y sus fines, no solo el de santificación de sus miembros y el de los fieles en general, sino tambien de obras de beneficencia, de cultura y de educacion que realizaban sin subvencion del Estado al que, sin embargo, ayudaban en sus funciones asistenciales y educativas, razon por la que merecian respeto y agradecimiento y por la que heria tanto a la Iglesia como al propio Estado "todo lo que tienda a privar a éste de la cooperación de las Congregaciones religiosas de uno u otro sexo en nuestra querida Nacion española".

Si tan suavemente habia pasado el prelado sobre el tema de la posible disolucion de las ordenes religiosas, señalando unicamente que el atentar contra las obras que ejercian suponía un perjuicio para el propio Estado, iba a aludir seguidamente en forma frontal al tema de los bienes que poseían, pero anclando su crítica de la posible

actuacion que el texto del proyecto permitia al Estado no en el contenido del parraro tercero del articulo 24, que tan contundentemente establecia su nacionalizacion sino, sorprendentemente, en los articulos 42 y 43 que si, desde luego, afectaban a la Iglesia fundamentalmente el 43 en lo que atania a los templos y a los tesoros artisticos e historicos que guardaban- atanian. en puridad, a todos los españoles al regular en forma generica el derecho de propiedad y las prerrogativas que sobre este derecho se reservaban al Estado. De esta forma el cardenal aludia a que, dado que "la religion y la iglesia catolica" promovian obras de cultura y beneficencia, necesitaban, "de sus templos y lugares sagrados de oracion y culto" para la santificacion y formcion de sus miembros; "edificios y bienes para el desarrollo y conservacion de aquellos fines propios del fin para el que fue fundada la Iglesia y esta ha fundado los Institutos religiosos" contra los que no se podia atentar sin que el derecho de propiedad que, como sociedad perfecta, detentaba la Iglesia quedase vulnerado, por lo que el Dr. ILUNDAIN concluia una argumentacion que se habia ceñido exclusivamente al interes de aquella con olvido de la defensa del derecho de toda clase de propiedad privada que, como sucintamente habia hecho en su "conclusion" el mensaje de la provincia eclesiastica tarraconense, podia haber efectuado, señalando, de forma demasiado unilateral e insuficiente, que en base a lo que acababa de exponer, "es de necesidad que se revisen y modifiquen los articulos 42 y 43 del repetido Proyecto de Constitucion".

Pasando a otro tema iniciaba el Dr. ILUNDAIN el tratamiento de la cuestion de la ensenanza aludiendo al contenido de los articulos 25 y 46⁽⁴⁸⁾ y señalando que si

(48) En el texto original se cita, por error de transcripcion, el articulo 36, relativo al derecho electoral.

bien en ellos se reconocía a la Iglesia el derecho de ejercer su función docente, eran tantas las restricciones que sobre él se establecían que, de prosperar el proyecto, equivaldría a privarle de él.

Se interrumpía aquí el pensamiento del cardenal sobre la educación para quejarse seguidamente, y en forma muy escueta, del texto del artículo 41 por cuanto en él se admitía la posibilidad de la disolución del vínculo matrimonial, lo que -decía- era diametralmente opuesto a los principios en que se fundamentaba ese sacramento, "por su naturaleza indisoluble", y a la estabilidad de la familia, dañando tanto a los hijos como a los cónyuges.

Retomando el tema de la enseñanza volvía a aludir al artículo 46 para indicar que la obligación estatal de facilitar la educación a todos los ciudadanos y su acceso a la enseñanza primaria no exigía establecer que esta fuera laica y en escuela única, antes al contrario, pues el que la constitución prohibiese el derecho a abrir establecimientos docentes y la libertad de enseñanza implicaría graves daños para los ciudadanos, siendo aun mayores estos si no se permitiese a la Iglesia "el ejercicio del derecho nativo en esta de abrir escuelas de todo orden y colegios de educación y enseñanza de la niñez y de la juventud" ya que "la ciencia y la fe católica mutuamente se coordinan y se armonizan" y la Iglesia había sido y era "luz de las inteligencias en todos los ramos de la cultura y de la enseñanza". Por ello el texto definitivo de la constitución debía armonizar los derechos del Estado, la Iglesia y los padres de familia sobre la educación de sus hijos, que tenían su raíz en la ley natural y en el evangelio y, a tal fin, debería propiciarse "a toda costa que la enseñanza religiosa sea parte integrante y necesaria de toda escuela", sobre todo teniendo en cuenta como era la nación española, fundamentalmente integrada por católicos y considerando

ademas -concluía el cardenal con ingenua frase del todo contraria al caro propósito republicano de acabar con la hegemonia del credo católico en todos los órdenes de la enseñanza- que "en nada perjudica la enseñanza religiosa en las escuelas", antes bien, con ella se educaba "la verdadera conciencia ciudadana" y se formaban "los pueblos grandes".

Hechas todas estas consideraciones el documento finalizaba solicitando con carácter general que, en base a ellas, las Cortes no aprobaran los artículos del proyecto que eran contrarios a los derechos de la religión y de la Iglesia y que, por tanto y de forma esencial, no se estableciera la separación de esta y del Estado, ya que con ello -se reiteraba sucintamente- "se perjudicaría a la religión y al bienestar nacional". El arzobispo de Sevilla y sus sufragáneos pedían a las constituyentes, por último, que no legislaran sin acuerdo con la Santa Sede cuestiones que afectaran a la religión o a la Iglesia, peticiones, todas ellas, que hacían "en nombre de la justicia y del derecho, en nombre del bien general de España cuya inmensa mayoría de ciudadanos profesa la religión católica, en nombre de los altos fundamentos morales y sociales de la paz pública".⁽⁴⁹⁾

(49) Archivo de las Cortes Españolas, "Exposiciones pro iglesia", legajo 539, 1931. Al tratarse de un documento que no se encuentra, que sepamos, publicado, lo incluimos como apéndice núm. 4.

4.3. El mensaje de la provincia eclesiástica de Burgos.

Aunque en la carta que el cardenal VIDAL enviara al Secretario de Estado vaticano el 19 de septiembre en la que, según indicaremos más adelante, le informaba de las gestiones realizadas por la Comisión de metropolitanos y le expresaba su parecer sobre la situación del momento en relación con los debates del proyecto de constitución, indicaba en su final que el ejemplo dado por la provincia eclesiástica tarraconense de dirigir un mensaje a las Cortes constituyentes había sido seguido por las provincias eclesiásticas de Sevilla, Burgos y Valladolid, lo cierto es que en lo que a esta última se refiere no hemos encontrado dicho mensaje publicado en su boletín eclesiástico ni en el archivo de las Cortes existe constancia del mismo.⁽⁵⁰⁾

Por lo que a la provincia eclesiástica de Burgos se refiere su actuación fue muy limitada en comparación con la seguida por las de Tarragona o Sevilla ya que se circunscribió a remitir el siguiente telegrama en el que, si bien se adhería con carácter general al mensaje de los prelados tarraconenses, no dejaba de formular concisamente e incluso con mayor precisión de la que contenía, como hemos expuesto, el escrito de Sevilla- los puntos del proyecto de constitución que la Iglesia consideraba más contrarios a sus intereses:

"Adheridos a Exposición provincia eclesiástica
Tarragona; nombre fieles católicos sus Diócesis,
que forman mayoría ciudadanos, democracia,

(50) También BATLLORI y ARBELDA señalan que no tienen más referencia que la de la carta de VIDAL sobre el mensaje de Valladolid. *Esglesia i Estat duran la segona...* 1, pág. 318, nota 20.

libertad, propiedad y familia, supremos fundamentos República, piden en la nueva Constitución respeto y especial protección para la Iglesia, sosteniendo culto y clero, continuación Comunidades religiosas con propios bienes y derechos; enseñanza religiosa escuelas y colegios, salvaguardando familia y derecho a educar hijos donde y cómo parezca.⁽⁵¹⁾

(51) s.f. "Telegrama", BDE de Burgos, año 74, 15 de septiembre de 1931, núm. 17, pág. 437. El boletín indicaba que este telegrama había sido dirigido por el arzobispo "en unión de los Sres. Obispos que componen la provincia eclesiástica de Burgos" al presidente del consejo de ministros y a las Cortes constituyentes. Entre los boletines consultados este telegrama fue publicado también por las diócesis sufragáneas de Vitoria (BDE de 1 de octubre de 1931, núm. 21, pág. 615) y León (BDE de 7 de octubre de 1931, núm. 17, pág. 472).

5. Las pastorales y circulares individuales sobre la nueva constitución publicadas tras el documento colectivo de 25 de julio de 1931 y la recepción de las instrucciones del nuncio: obispos de Tui, Vich, Ávila, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Salamanca y Tortosa.

Tal como el cardenal VIDAL comunicaba al Secretario de Estado vaticano en carta de 9 de septiembre de 1931 y reiteraba el día 19 siguiente, "a raíz de la recepción de las instrucciones del nuncio y secundando los deseos de la Santa Sede, los distintos miembros del episcopado habían procurado mover a la opinión católica para que actuase en pro de una constitución favorable a la Iglesia.

El primer prelado en actuar en tal sentido fue, entre los boletines eclesásticos consultados, el obispo de Tui, Dr. Antonio GARCÍA y GARCÍA, que en 20 de agosto suscribió una exhortación pastoral glosando el documento colectivo de 25 de julio e instando a los fieles a movilizarse en defensa de los derechos de la religión y de la Iglesia.

Comenzaba el documento resaltando la trascendencia del momento, razón por la que se dirigía a los fieles ya que se entraba en "la tercera etapa del desarrollo y transformación que viene operándose en la nación española" por lo que, con su escrito, pretendía divulgar la pastoral colectiva del episcopado exhortando a todos a su lectura y, en línea con él, contribuir a la defensa de los derechos de la Iglesia y al bien espiritual de sus diocesanos, "todo sin detrimento de la sumisión y respeto debidos a la República y a su Gobierno en conformidad con las ordenes de la Santa Sede"; respeto y sumisión que no obstaban para que el Dr. GARCÍA y

(52) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I. págs. 298 y 317.

GARCÍA se explayase a continuación en frases de gran dureza sobre el contenido de ciertos puntos del proyecto de constitución y en los que sin duda se basaba para paliar, o justificar, en lo posible, tal dureza.

Hecho este preámbulo volvía a resaltar el prelado la importancia que revestía el hecho de dotar al país de una nueva constitución, que había de ser, precisamente, la que España necesitara en el orden civil y religioso; cuestión que sobremedera importaba a los católicos pues la norma suprema no sólo sería fundamento de la vida social española sino que "muy hondamente afectará a la vida religiosa, a la vida de la Iglesia Católica en España" y, a tales efectos, no debían olvidar que "hay no pocos que intentan por todos los caminos llegar a la descristianización de España" para lo cual trabajaban de una forma que los católicos habían de imitar. En la pastoral colectiva se exponía la doctrina católica sobre los puntos religiosos principales a los que se oponía el proyecto de constitución y que, en relación a ellos "no puede ser aprobado ni votado ni apoyado ni favorecido en modo alguno por los verdaderos y buenos católicos"; por ello deberían estos meditar en los deberes que tenían en esa hora y en el modo de actuar para cumplirlos "siempre dentro de la más estricta honradez cristiana y rectitud legal", a efectos de librar a la Iglesia "de los males gravísimos que la amenazan", males que el Dr. GARCÍA pasaba seguidamente a enumerar:

"Subarrones de tempestad fiera amenazan descargar, (y algunos ya han descargado despiadadamente), contra la educación cristiana de la niñez y de la juventud; contra el matrimonio, raíz divina y sacramental de la familia; contra las Ordenes y Congregaciones religiosas tan amadas y estimadas por la Iglesia; contra la libertad e independencia de la Jerarquía eclesiástica; contra los bienes eclesiásticos, muebles e inmuebles, artísticos y no artísticos; contra el prestigio y honor divino que al culto católico corresponden; contra la influencia pastoral del sacerdocio, tan

beneficiosa, contra las organizaciones de la Acción Católica que tantos frutos de civilización cristiana prometen..."

Respecto a algunos de estos ataques el episcopado y los fieles habían elevado la correspondiente protesta y ahora, por medio de la pastoral colectiva, los prelados volvían a hacer oír su voz para, con palabras de los pontífices, adoctrinar a los fieles y avisarles del "virus horrendo de laicismo y ateísmo, de indiferentismo y anticatolicismo, que envenena el proyecto de la futura Constitución española", peligros todos ellos que, según el obispo, ya se manifestaban en muchos de los artículos del anteproyecto de la Comisión asesora agravándose en el proyecto formulado por la Comisión parlamentaria que, destacaba, llegaba a desvirtuar el matrimonio en su artículo treinta y cinco, hecho que el obispo calificaba con las siguientes palabras llenas de singular dureza ante la posibilidad de la introducción del divorcio en la legislación española:

"...el matrimonio pierde hasta la naturaleza de contrato y se convierte casi en unión efímera de amor libre, con todos los horrores de inmoralidad y criminalidad, nauseabunda y sangrienta, que formarían el cortejo del libertinaje del amor, legalizado en el Código fundamental de España, para ruina de la sociedad eclesíástica y civil."

Ante peligros tan graves, tanto para la Iglesia como para la patria, no bastaba lo hecho hasta entonces y si "los adversarios" podían "dentro del orden legal y por medios legales trabajar para que triunfen sus intentos" también los católicos podían hacerlo en defensa de los derechos de la Iglesia y con el debido respeto a la autoridad constituida. Tal trabajo podía efectuarse de muchas formas, "con la lengua, con la pluma, con la influencia familiar y social, con la propaganda de la prensa católica y con la labor política en el sentido más noble de esa palabra...". No

obstante, lo mas urgente era, a juicio del prelado, el estudio de la patoral colectiva en la que se exponian "los puntos principales en los que el proyecto de Constitucion se opone abiertamente a los derechos que a la Iglesia Catolica corresponden o por concesion de su mismo divino Fundador Nuestro Senor Jesucristo, o por otros titulos legitimos de inquebrantable fuerza juridica" y ante lo que existia una gran confusion hasta el punto de que se siguieran proclamando catolicos muchos que profesaban doctrinas contrarias a las enseñadas por la iglesia o que se pretendiera tomar como modelo para la Constitucion en lo que atania a la religion las de naciones que no reconocian plenamente los derechos de la Iglesia y en los que esta se veia forzada a resignarse con lo que le daban. Claro que, junto a ello, existian tambien "la mentira, la falsedad, la calumnia" que estaban realizando "una labor espantosa, no demoledora, sino aniquiladora, en muchos entendimientos y en muchos corazones" por medio de libros, folletos o periodicos que "caen como lluvia de error y de vicio sobre innumerables almas, y los efectos de esta lluvia, que tiene intensidad y fuerza de diluvio, ponen espanto en el corazon y obligan con apremios de conciencia que no debemos resistir mas, a darnos de lleno al apostolado de la buena prensa", para lo cual hacian falta catolicos dedicados que laboraran "siempre con rectitud cristiana y legal, para combatir el indiferentismo religioso y el laicismo y el ateismo del Estado y la escuela sin Dios y sin Crucifijo, para defender las Ordenes religiosas y el Matrimonio cristiano y los bienes y la libertad y la independencia de la Iglesia", catolicos que podian hacer mucho "sin conspiraciones y sin conjuraciones, en forma diáfana y patente, a la luz del mediodia, para que apareciese con toda su pujanza el sentir y las aspiraciones del pueblo español, que es catolico y quiere seguir siendolo con religiosidad individual y familiar y social, en los municipios y en las diputaciones y en el Estado entero".

Tras estas optimistas consideraciones, que contrastaban con la actuación seguida por muchas corporaciones locales respecto a la Iglesia y a las que ya nos hemos referido en el capítulo "La Iglesia ante la República" pasaba el prelado a concretar las posibles líneas de acción que, de acuerdo con las instrucciones emanadas de la nunciatura, podían emprender los católicos, líneas que, sobre todo en lo que afectaba a la posible influencia a ejercer sobre los representantes políticos, no dejaban de denotar, también, un singular optimismo respecto a lo que cabía esperar de una Cámara cuya composición no auguraba precisamente una actitud que pudiera resultar favorable a la Iglesia:

"Para ello, en forma decidida pero respetuosa, campañas de prensa y actos públicos celebrados con arreglo a las leyes y con perfecto orden; mensajes cortos y razonados dirigidos a todas las personalidades que puedan influir en la discusión y votación de la Constitución futura y singularmente a los diputados; escritos de exposición y de súplica apremiante de aquellas clases sociales especialmente afectadas por los artículos del proyecto de Constitución contrarios a la doctrina de la Iglesia; gestiones particulares, íntimas, sobre los diputados de las Constituyentes, y sobre los directores de los partidos políticos para actuar sobre sus cabezas y sobre los corazones haciéndoles ver los daños gravísimos que para España pueden derivarse, e inclinando sus voluntades para que en todo obren en conformidad con los dictámenes de la recta conciencia."

Estos medios, según el Dr. GARCÍA "y otros, todos pacíficos y legales, nobles y cristianos, utilizados por millares de católicos que están en condiciones de poderlos utilizar, harían cambiar el rumbo sectario que tiene el proyecto de Constitución elaborado por la Comisión parlamentaria"; frase esta que viene a matizar el optimismo anterior del prelado introduciendo una nueva precisión en extremo confiada ante la actitud real de muchos que se consideraban creyentes: la influencia antes descrita podría

lograrse si intervenían millares de católicos, precisión que, conocedor, como toda la jerarquía, de la realidad sociológica del catolicismo hispano, volvía a matizar el Dr. GARCÍA al hacer un llamamiento expreso a un sector que, dada la consideración política de la mujer vigente hasta la entrada en vigor de la Constitución que ahora se combatía, poco podía efectuar, salvo en el concreto campo del envío de mensajes a las Cortes constituyentes -como así harían en los casos que más adelante veremos- y la asistencia a actos político-confesionales, o en el más pasivo de la influencia doméstica cerca del cónyuge con derecho a opinión política; invitándolas así a asumir un protagonismo no ejercido por los hombres y al que la Iglesia quería ahora llamarlas, haciendo hincapié en el que consideraba más abonado campo cerca de ellas ante el miedo a la ausencia de los varones: el del temor a las obligaciones incumplidas, antes que en el de lo positivo de la tarea a realizar "Mediten los católicos -decía así el obispo- y singularmente las señoras católicas que se distinguen por su religiosidad consciente y activa, la gravísima responsabilidad que contraerán delante de Dios, si continúan con los brazos cruzados o los mueven con indolencia y desidia".

Concluidas estas exhortaciones añadía el Dr. Antonio GARCÍA que si no todos podían trabajar en ese "apostolado exterior" que acababa de describir, no había ningún fiel que no pudiera actuar en el ámbito de la oración y del sufrimiento "para que Dios ilumine a los legisladores y guíe sus voluntades, y redacten y voten y promulguen una Constitución que sea manantial de vida próspera para todas las clases sociales; Constitución en la que a la Santa Iglesia Católica y a todo lo que ella encierra, se guarden las consideraciones jurídicas y sociales que por tantos títulos le debe España"; a tal fin, que debía ser "la intención dominante en nuestras oraciones y sacrificios", el prelado establecía, como conclusión, diversos actos de

culto.⁽⁵²⁾

Continuarían las instrucciones de los obispos con la pastoral publicada por el Dr. Juan PERELLÓ y POU, obispo de Vich, que aprovecharía la inclusión en el mismo número del boletín de la diócesis del documento colectivo de 25 de julio de 1931⁽⁵³⁾ para dirigirse a los fieles no para exhortarles a la acción como, siguiendo las instrucciones de la nunciatura, había hecho el Dr. GARCÍA, sino, simplemente, para recordar por su cuenta, tras glosar el documento de SEGURA, los principios que ya se contenían en aquél, si bien resaltando extremos más singularmente desarrollados por el mensaje elevado a las Cortes por la provincia eclesiástica tarraconense y que en las fechas de redacción de su pastoral el prelado ya conocía.

Comenzaba así el obispo destacando cómo acababa de repercutir "en los cuatro ángulos de la nación española la voz unánime del Episcopado,"⁽⁵⁴⁾ queriendo él ahora llamar la atención de sus fieles sobre la doctrina contenida en el mismo para que meditaran sobre ciertos puntos básicos "añadiendo de nuestra parte algunas materias de verdadera actualidad", materias estas que -como hemos señalado- venían destacadas en el mensaje de la tarraconense.

(53) 20 de agosto de 1931, "Exhortación Pastoral sobre la hora presente de España", BOE de Tuy, año 72, 27 de agosto de 1931, núm. 15, págs. 361-369.

(54) Como recordamos, el Boletín eclesiástico de Vich, al igual que los de Gerona y Barcelona y a diferencia de los de Tarragona y Urgel, publicó la versión del boletín eclesiástico de Toledo. Véase la nota 34.

(55) Ya hemos destacado en otro lugar lo que realmente tenía de "unánime" en esta ocasión dicha voz.

De acuerdo con estos propósitos estructuraba el Dr. PERELLÓ su pastoral en seis epígrafes: "La sociedad civil y el poder que la rige proceden de Dios"; "El Estado y la Constitución fundamental no pueden ser ateos"; "La Iglesia y el Estado han de estar unidos"; "Escuela religiosa y escuela laica"; "El divorcio matrimonial" y "Derecho nuevo y tiempos modernos".

Desarrollando el primer epígrafe apuntaba el obispo que "uno de los errores que más cunden en nuestros días es el de la *Soberanía popular*,⁽⁵⁶⁾ esto es que el poder y la autoridad para gobernar emanan del pueblo; que los gobernantes son meros delegados del mismo, sin autoridad propia alguna; que esa delegación es condicionada, pendiente siempre del pueblo, que se la puede retirar cuando le pareciese (sic), apelando, si importa, a la insurrección armada", postulado este sobre el que el obispo, siguiendo la pauta utilizada por el cardenal SEGURA, indicaba que era un error condenado por León XIII en su encíclica "Dinturnum",⁽⁵⁷⁾ según el texto que reproducía, añadiendo que "la razón humana enseña que la sociedad civil y la autoridad que la informa y gobierna son criaturas de Dios y obra de sus manos, pues nada ha existido ni existirá jamás que no haya recibido el ser de Dios", como tajantemente, y en concreto sobre el poder, había afirmado San Pablo, por lo que era "un verdadero absurdo afirmar que la sociedad civil y el poder que la rige no proceden de Dios y que el Estado es origen y fuente de todos los derechos", siendo esta una proposición condenada por Pío IX en su alocución "Maxima quidem" de 9 de junio de 1862, e inserta en el "Syllabus" con el número XXXIX.

(56) En bastardilla en el original.

(57) Recordamos que SEGURA se había apoyado para hacer esta misma condena en otra encíclica de León XIII; la "Inmortale Dei".

Para negar que el Estado o la Constitución pudieran ser ateos señalaba el prelado, apoyándose exclusivamente en estructuras de autoridad sin referencia alguna a conceptos de amor como hubiera sido más propio de un pastor de la iglesia, que tanto la fe como la razón enseñaban que el hombre dependía totalmente de Dios, que le daba la existencia y se la conservaba a su beneplácito, siendo esta dependencia la que le obligaba a rendirle culto y vasallaje. De ahí que sobre la sociedad civil, como conjunto de hombres, pesaran "los mismos deberes de sumisión y vasallaje respecto de Dios que gravitan sobre sus componentes".

A este razonamiento añadía el Dr. PERELLÓ otro especialmente singular y del todo contradictorio con la realidad de otras sociedades coetáneas, afirmando que "la autoridad social, que es una participación o derivación inmediata de la autoridad divina, no puede ser atea sin negarse necesariamente a sí misma" y añadiendo que puesto que los súbditos no habían de ser gobernados por la violencia sino por la ley, esta perdía su fuerza obligatoria "cuando los subordinados no ven en el legislador un poder superior, sino igual a sí mismo, que pueden deponer el día que se les antoje", frase que encerraba un profundo desconocimiento, o un absoluto desprecio, del sistema democrático.

Como colofón de estos simplistas argumentos concluía el prelado señalando: "Si pues los elementos esenciales de la sociedad son necesariamente teocráticos, la resultante de los mismos o sea la sociedad civil jamás podrá ser atea" por lo que la constitución de los Estados debía "reconocer a Dios, como principio y fin de todas las cosas", tal como habían hecho todos los pueblos a lo largo de la historia, incluso los politeístas, o como hasta el mismo Rousseau -"que en gran parte siguió a Bayle, soñador de sociedades ateas"- confesó en su "Contrato esencial (sic)" al decir que

JAMÁS se había fundado estado alguno cuya base no hubiera sido la religión.

Pasando a tratar de la necesaria unión entre la Iglesia y el Estado señalaba el prelado que al negar los librepensadores la divinidad de la Iglesia y considerarla como cosa puramente humana, la querían separada del Estado y sujeta al mismo "como si fuera una sociedad mercantil", error que había sido condenado por la proposición IV del "Syllabus" y proscrito por Pío IX en su alocución "Acerbissimum" de 27 de septiembre de 1852. Dios era el autor de la Iglesia y del Estado "y a entrambos rundo para vivir en paz y tranquilidad, cumpliendo cada cual su misión respectiva", temporal o espiritual, por lo que no debían separarse jamás, tal y como había enseñado claramente León XIII en sus encíclicas "Libertas" o "Arcanum".

Por ello, retomando la demanda de la necesidad de un pacto entre Iglesia y Estado, tantas veces expuesta por el cardenal VIDAL y aludida en el mensaje de la provincia eclesiástica de Tarragona, se referiría sucintamente, sin argumentos de base anclados en la nueva situación política de España, a la necesidad de un concordato:

"Salta a la vista que siendo el hombre indivisible y perteneciendo a ambas sociedades, su bienestar temporal y eterno demanda relaciones de concordia y armonía entre ambos poderes a quienes vive sujeto; lo cual solo puede obtenerse por medio de un Concordato. Debemos pues confesar que la Iglesia y el Estado son dos cosas por su naturaleza inseparables, de lo contrario han de sobrevenir grandes quebrantos para la una y para el otro."

Siguiendo el esquema del mensaje de la provincia tarraconense se referirá seguidamente el Dr. PERELLÓ a los

temas de la enseñanza laica y del divorcio matrimonial⁽⁵⁸⁾ para concluir la pastoral tratando del "Derecho nuevo y tiempos modernos", cuestión que abordaba enumerando la serie de males que introducía toda sociedad que prescindiera de Dios al forjar el orden nuevo que con tal postura instauraba, males que no eran otros que las medidas ya dictadas por el gobierno provisional contra los seculares privilegios de la Iglesia española o las que, como inminentes, se anunciaban, amén de otra que, como el uso del hábito talar, traía el obispo a colación sin fundamento alguno siendo, como era, fruto de la excesiva prevención de algunos clérigos antes que de la actuación del Gobierno.⁽⁵⁹⁾

"Cuando la sociedad prescinde de Dios y no quiere reconocer la realeza de Jesucristo, forja un orden nuevo de cosas, un derecho nuevo y en su virtud proclama la independencia del hombre, la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la escuela laica, la secularización de cementerios, el enterramiento civil, la cremación de los cadáveres, la prohibición de procesiones por las calles y plazas y del toque de campanas, la abolición de las ordenes religiosas y nacionalización de sus bienes, la prohibición del hábito talar y otras cosas análogas."

Ante tal estado de cosas muchos cristianos llegaban a creer que había que acomodarse a las nuevas circunstancias y transigir "con los tiempos modernos" por lo que, en virtud de la evolución de los acontecimientos, la Iglesia debía encerrarse "en el recinto sagrado de sus templos, guardando profundo silencio para evitar males mayores". Esta conducta sería censurable para todos los creyentes que, en virtud de la inmutabilidad de la historia de la Iglesia y la de sus instituciones desde su origen, debían rechazarla totalmente.

(58) Véase para estos temas los capítulos correspondientes.

(59) Véase sobre esta cuestión lo ya referido en el capítulo "La Iglesia ante la República," epígrafe 10.2 "La jerarquía y el clero."

Por todo ello, y como final de la pastoral, concluía el obispo exhortando a sus fieles a rechazar todas las doctrinas y errores reprobados por la Iglesia, "errores" muchos de ellos anclados en principios puramente decimonónicos, cuya yuxtapuesta enumeración no deja de producir una vez más al lector de hoy -creyente o no- una cierta perplejidad no exenta de asombro, pero que, como reiteradamente hemos visto en palabras de la jerarquía, estaban tajantemente proscritos por la doctrina eclesial de la época, singularmente enumerados en el "Syllabus" de Pío IX, como el obispo una vez más nos recuerda, debiendo ser en este caso además rechazados, según parece desprenderse de la pluma del Dr. PERELLO y FOU, no por medio del estudio y la formación de una docta opinión que llevara luz a la mente de los fieles sobre contrapuestas ideas y creencias, sino por medio de unas reglas de conducta basadas, más que en una sólida fe y rectos criterios, en una simple moral de costumbres apoyada, eso sí y lógicamente, en los sacramentos y la oración:

"Por último os exhortamos, Venerables Hermanos y Amados Hijos, a que abomineis de todas las doctrinas y errores condenados por la Iglesia como son: el ateísmo social, la soberanía popular, la separación de la Iglesia y del Estado, la libertad de conciencia, la libertad de imprenta, la libertad de cultos, la escuela laica, el divorcio, la secularización de cementerios y de todo cuanto se contiene y reprueba en el "Syllabus"; y que ajustéis vuestra conducta a la moral evangélica, huyendo de cines inverecundos, de espectáculos provocativos. Dejad la moda procaz, la mala prensa y la novela impúdica, que causa más estragos en el alma que una epidemia en el cuerpo; frecuentad el templo del Señor para cumplir los divinos preceptos, oír la palabra de Dios y recibir los sacramentos. No descuidéis la oración cotidiana

por la Iglesia y por la patria."⁽⁶⁰⁾

Reveladora de un concienzudo seguimiento de la trayectoria del proyecto constitucional y el consiguiente análisis del último texto elaborado era la sucinta circular suscrita por el obispo de Ávila Dr. Enrique PLA y DENIEL que, aunque como su título indicaba, tenía el propósito de ordenar rogativas para que la nueva Constitución fuera favorable a la religión, iba más allá de este cometido haciendo una minuciosa descripción del proceso habido y del contenido del texto final, a fin de explicitar la serie de principios que en él eran contrarios al sentir católico.

Comenzaba el prelado poniendo de manifiesto la trascendencia de los momentos que vivía España y ante los cuales la Iglesia no podía permanecer indiferente, máxime cuando en el proyecto definitivo de la constitución se trataban temas tales como la enseñanza, la familia o la propiedad y, de ahí, la serie de bienes o de males que podían dimanar de la nueva ley fundamental "en todos los ordenes, espiritual y religioso, familiar, social, cultural y económico."

"El Episcopado Español ha publicado una Pastoral colectiva en vista del proyecto de Constitución elaborado por una Comisión Jurídica Asesora. Este proyecto ha sido modificado en puntos esencialísimos por la Comisión parlamentaria. El Gobierno no ha hecho suyo uno ni otro y por tanto el último ha de ser sometido a gran discusión. Desgraciadamente en el proyecto que va a discutirse se considera a la Iglesia como a una asociación meramente privada; se prohíben los actos de culto fuera de los templos; se niega el auxilio económico del Estado a la misma, auxilio que en España tiene el carácter de parcial

(60) 24 de agosto de 1931, "Alocución pastoral sobre el anterior documento", BOE de Vich, año 77, 31 de agosto de 1931, núm. 2080, págs. 443-451.

restitución de los bienes que le fueron arrebatados antes del Concordato vigente de 1851 y de compensación de otros que fueron entregados por la misma Iglesia según el Convenio de 1859; se intenta disolver las órdenes religiosas y nacionalizar sus bienes; se propone el divorcio por mutuo disenso, por libre voluntad de la mujer o a solicitud del marido con causa; se establece la enseñanza oficial laica; se sujeta la enseñanza de la doctrina en los templos a la inspección del Estado; se atribuye al mismo originariamente la propiedad de las fuentes naturales de riqueza (que es mucho más que reconocer una función social de la propiedad como reconoce la doctrina católica); no se reconoce la inmunidad de los clérigos del servicio militar reconocida en naciones protestantes."

Si todos estos proyectos, contrarios a la doctrina católica, prevalecieran "serían muchos y gravísimos los males que sufrirían las almas, la familia, la Iglesia y la sociedad", por ello los diputados católicos habían de saber portarse como tales y el resto de los fieles tenían que saber defender los intereses de la familia, de la religión y de la Iglesia "que no se entromete en todas las otras cuestiones libres de forma de régimen político ni de estructuración del Estado, salvo siempre el respeto a la autoridad y acatamiento a los poderes constituidos".

No debían los párrocos y predicadores juzgar en el templo el proyecto de constitución para que no se les pudiera acusar de que trataban en él de política, mas ello no excluía que, tanto privada como públicamente, se elevaran oraciones y se ofrecieran sacrificios para pedir "que la futura Constitución sea tal que promueva el bien público en todos los órdenes y por tanto en el orden religioso", y, por ello, establecía una serie de actos de culto encaminados a

impetrar que quedaran a salvo "los derechos de la religion y de la Iglesia en la nueva Constitucion."⁽⁶¹⁾

Fue el Dr. Isidro GOMA el prelado que, en la secuencia temporal del verano de 1931 a que nos estamos refiriendo, tomara seguidamente la pluma para, tras exponer su personal, tremendista y negativa vision de los momentos que atravesaba la nacion y las consecuencias que para ella podian derivarse del nuevo texto constitucional, acabar recomendando, en breves lineas, a sus fieles la accion en pro de una ley fundamental favorable a la Iglesia y la oracion en igual sentido. Los escasos dias transcurridos entre la publicacion de la circular del Dr. PLA y DENIEL y esta pastoral, que nos hace examinar una a continuacion de la otra, nos lleva forzosamente a destacar el contraste entre la completa enumeracion de regulaciones contrarias a la doctrina catolica que figuraban en el proyecto de constitucion y que, en términos de elegante concisión y respeto, habia efectuado el obispo de Ávila, con la siempre exuberante pluma del Dr. GOMA y sus tambien exuberantes y reiterativos argumentos cargados de duras irases y de negros tintes en la descripcion del presente y porvenir de aquella España.⁽⁶²⁾

(61) 25 de agosto de 1931, "Circular ordenando rogativas para que se de a España una Constitución favorable al bien de la religion y de la patria", BOE de Avila, año 42, 28 de agosto de 1931, num. 10, pags. 391-393.

(62) No creemos muy desacertado encontrar en esta pastoral las primicias de algunas de las ideas contenidas en el famoso documento colectivo de 1 de julio de 1937 sobre la guerra de España, obra de la pluma del Dr. GOMA y que, como es sabido, tanto el cardenal VIDAL como el obispo de Vitoria se negarian a firmar. No es momento este de analizar la razon que impulsó al entonces primado a dar a luz el polémico

Apoyándose en la publicación del documento colectivo de 25 de julio, del que encarecer su lectura era, según decía, el motivo de escribir las que llamaba "estas líneas", amén de avisar a los fieles sobre "la gravedad del momento histórico" que se vivía, se refería el obispo a su ánimo "agobiado de dolor y pasmo", tanto por las normas dictadas por el gobierno provisional desde el inicio de su andadura, a las que el prelado generica y vagamente aludía como un ataque frontal contra los católicos, como por las líneas maestras en que iba a fundamentarse el nuevo texto constitucional.

texto; según recoge su biógrafo de la carta enviada por BOMA a la Santa Sede el 8 de junio 1937, fue producto de un ruego hecho por Franco en orden a difundir en el extranjero un escrito colectivo del episcopado español "con el fin de desvirtuar la información falsa o tendenciosa que tanto daño ha hecho al buen nombre de España y de la Iglesia en ella" (GRANADOS, Anastasio, *El cardenal BOMA, Prímado de España*, Madrid, 1969, págs. 171-172. Parece oportuno indicar aquí que GRANADOS tan sólo dedica cuarenta y dos páginas de su obra al período de la República, de las que únicamente veintiseis se refieren a la actuación del prelado en el período que examinamos). IRIBARREN, basándose en la cifra de sacerdotes y religiosos asesinados, que toma de los datos dados por Antonio MONTERO MORENO en *Historia de la persecución religiosa en España, 1936-1939*, Madrid, 1961, aduce que las circunstancias de tal número de mártires, el hecho de una España dividida en dos mitades y la perspectiva de una guerra todavía larga, "tenían que suscitar en los obispos... el temor de una total aniquilación de la Iglesia en la España que llamaban roja", razón por la que se dirigían a los de todo el mundo para informarles de una situación en la que estaba en juego "los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la libertad de los ciudadanos", queriendo mostrar hechos con los que oponerse a las tergiversaciones que se hacían en el extranjero (IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del Episcopado español, 1870-1974*, Madrid, 1974, págs. 41-44). Sea cual sea la razón última que motivó esta carta colectiva, lo que nos interesa aquí es remitirnos a aquellas ideas y expresiones cuyo quermen cabe encontrar en las contenidas en la pastoral que ahora examinamos, según destacaremos en las notas siguientes, razón por la que, pese a estar incluido en la obra citada de IRIBARREN, reproducimos el polémico documento de 1937 en el apéndice núm. 5, excusando cualquier comentario crítico del mismo por exceder de los límites a que se contrae este trabajo. Para mayor conocimiento de la génesis y contenido de la citada pastoral, aparte de la obra de Anastasio GRANADOS mencionada, ver también la de M^{te} Luisa RODRIGUEZ AISA, *El cardenal Boma y la guerra de España. - Aspectos de la gestión pública del Prímado, 1936-1939*, Madrid, 1981, págs. 233-269.

"Dolor por la serie de atentados cometidos en pocos meses contra lo que nos es más caro, nuestra fe, nuestras cosas sagradas, nuestra vida cristiana; pasmo, porque no acertamos a comprender como, en nombre de la ley, se ha podido atropellar una serie de grandes cosas por la ley consagradas, divina, humana y hasta natural; ni como, tratándose de formular un proyecto de ley básica y constitucional, de una sociedad civilizada y cristiana como, gracias a Dios, es la nuestra, se ha compuesto tal, que de su trama se ha excluido hasta el nombre de Dios y en el que positivamente se proyecta el lanzamiento oficial de Dios de nuestra vida nacional."

Tal diseño era, además, entre las distintas constituciones "un caso esporádico, si no de odio formal de Dios, de desden de los divino", ya que en el moderno constitucionalismo sólo existían dos casos analogos "tal vez más agudos de eliminación estatal de Dios", los de Rusia, Méjico, y dos o tres de moderado espíritu laicizante: Portugal, Guatemala y Honduras. Esta era, por otra parte, añadía el obispo, con claro olvido o desconocimiento del proyecto de constitución de la I República, la primera vez que en España trataba de "anonadarse" a Dios en la ley fundamental del Estado.

Frente al proyecto y a la actuación seguida por el gobierno, destacaba el prelado "un contraste que casi diríamos nos abochorna" y que era el que se daba entre la actitud de la jerarquía -que el calificaba de "noble y franca" adhesión al régimen, enterdiendo en esta línea las palabras que el mismo había pronunciado sobre la República, como seguidamente pasará a explicitar, aunque ello pudiera considerarse cuando menos dudoso desde el punto de vista político- y la actuación del Estado, que respondía "con el desdén inconsiderado, con la persecución legal de que han sido objeto casi todas nuestras cosas". Basándose en la idea del deber y dejando traslucir así su personal criterio, se

refería GOMA a las orientaciones dadas ante el cambio político presentándolas como un esfuerzo para convencer a unos fieles, que describía como aún reacios a la República, de la obligación de acatar a los nuevos poderes cuando, sin dejar de expresar tal obligación, el episcopado más se había ocupado de justificar la postura de la Iglesia y de condenar cualquier defensa de la idea de soberanía popular inherente a la nueva democracia. La prolija referencia ya efectuada de las anteriores palabras del obispo nos exime ahora de destacar el contraste entre ellas y la justificación y finalidad que, con carácter exclusivo, ahora quería darles: (63)

"Bien recordareis, amados hijos nuestros, que a raíz del cambio de régimen, siguiendo altísimas indicaciones que eran para todos nosotros un mandato, os exhortábamos a acatar, para el logro del bien común, la autoridad constituida. Pudimos no hacer más, que nuestro deber estaba ya cumplido; pero a los pocos días os dirigíamos una Carta Pastoral, "Los deberes de la hora presente", razonando copiosamente la actitud de la Iglesia, deshaciendo los fuertísimos reparos que aun hoy ahogan muchos en el fondo de sus almas, y trazándoos la línea de conducta a seguir en orden a las cuestiones fundamentales que con el advenimiento del nuevo régimen iban a plantearse. Os decíamos que nuestra obligación, la de todos, sin abdicar las opiniones particulares sobre formas de gobierno, era colaborar con los hombres del nuevo régimen.

"Y seguimos diciéndoos lo mismo, y os lo diremos mientras aliente nuestro pecho. Es autoridad que viene de Dios, y es preciso estar racional y voluntariamente sometidos a ella, mientras sus orientaciones y sus mandatos no entren en vuestras conciencias en colisión con la autoridad y con los mandatos de Dios."

No tenían los católicos la culpa de que tal colisión se hubiera dado "repetidas veces en forma grave e irreductible" en el orden legal, eran principios en los que la iglesia no

(63) Ver en el capítulo "La Iglesia ante la República" el epígrafe 2.3.

podría transigir nunca y, por ello, y dando aquí el primer aldabonazo de la jerarquía al acuñar, con una dureza a la que ningún prelado se había atrevido, el término de "resistencia legal", formularía su advertencia del posible dispar camino a seguir por los creyentes: ante la disyuntiva de actuar "en cristiano, según nos manda la ley de Dios, o en pagano, como puede ser nos mande la ley de los hombres", quizá la "actitud reverente y sumisa, ante la autoridad, por el desdén con que se hayan tratado las cosas atañentes a nuestra conciencia de católicos, deberá tal vez convertirse, en estos puntos concretos, en resistencia legal, tan noble como el acatamiento, a toda sugestión de violación de la ley de Dios."⁶⁴

Estas palabras, recalcaba el prelado, debían servir de aviso a cuantos se extralimitaran "por sectarismo o por celo mal entendido por el nuevo régimen" en el ejercicio de su autoridad, "como ha ocurrido en varias ocasiones en nuestra jurisdicción -añadía, pensando en casos concretos por él sufridos- con autoridades subalternas, alusión sin duda excesiva ya que, por muy grave que fuese lo ocurrido"⁶⁵ nunca podía tratarse de ese ataque en el orden legal a aquellos principios irreductibles para la Iglesia, base del actuar "en cristiano o en pagano" que, como había comenzado diciendo, era lo que en puridad justificaba la "resistencia legal" que ahora propugnaba.

(64) Sobre esta llamada a la "resistencia legal" nos remitimos a lo dicho en la nota 62 y, por tanto, al apéndice núm. 5.

(65) Como ya hemos visto y más adelante reiteraremos, la actuación de las autoridades locales contra la Iglesia se ceñía a la prohibición de celebración de procesiones, imposición de tributos, expropiación de cementerios, supresión de monumentos o nombres religiosos en vías públicas y otras de índole similar.

Mas no sólo eran aviso para las autoridades públicas, eran también una "lección" para los católicos que seguían estando contra la República, una lección para "aquellos católicos que quizá recriminan a otros por haber ofrecido su acatamiento a las nuevas cosas", este debería darse, por supuesto, ya que la autoridad, en sí, lo exigía, y lo exigía "respetuoso, noble y abnegado", pero "el abuso de la autoridad, cometido precisamente contra las razones de conciencia de quien noblemente la acató, es, además de una ingratitud y de un acto impolítico, un insensato forcejeo con las conciencias rectas y probas, que tienen el deber de no sucumbir".⁽⁶⁶⁾

Hecha esta contundente llamada de atención y para recordar los hitos que la justificaban, se refería seguidamente el prelado a los incendios de iglesias y conventos rememorando cómo "ya en los comienzos del nuevo régimen" la jerarquía tuvo que protestar por aquellos atentados, "como lo hizo en masa el pueblo católico", siendo "tan grave el daño causado a la nación querida, que se conmovieron los cimientos del orden social, que se produjo agudísimo estado de alarma en el espíritu nacional"⁽⁶⁷⁾ y que el crédito de España bajó, de confines afuera, en el orden social y económico, en forma que denotaba haberse tocado la entraña viva de nuestro pueblo". Aquellos hechos habían producido, según el Dr. GOMÁ, "tal vez algún retroceso en el camino emprendido, quizás un cambio de táctica, pero no la enmienda radical que se imponía. Y el certero instinto del pueblo pudo comprender que con la nueva forma de gobierno se

(66) Reiteramos lo dicho en la nota 62 y, por tanto, seguimos remitiéndonos al apéndice núm. 5.

(67) El subrayado es nuestro a fin de destacar la terminología a que nos hemos referido en la nota 62. Ver el apéndice citado.

había planteado en toda su amplitud la cuestión religiosa, que equivale a decir un ataque a fondo contra la religión",⁽⁶⁶⁾ ante lo cual él mismo había tenido que reconocer lo que calificaba de su "equivocación" pues había creído, decía, "que un nombre que puede ser de hecho, y lo es en tesis, tan justo, inocente y progresivo como otro cualquiera de sus equivalentes en el régimen de los pueblos, el nombre de república, se había purgado de las lacras y procedimientos que lo hicieron de infausto recuerdo en nuestra patria."

Esto no había sido así, como lo corroboraban -añadía, con un nuevo argumento- las disposiciones dictadas en cuatro meses contra la religión y que en esos mismos días habían añadido "un decreto que implica una excepción de desfavor y desconfianza -cuando no pudiera interpretarse en otro sentido-, [por el que] se atenta contra la intangibilidad de los bienes de la Santa Iglesia, vulnerando sacratísimos derechos en materia que no puede substraerse a la acción de la suprema autoridad eclesiástica".⁽⁶⁷⁾ Toda esta legislación había tenido como consecuencia la anulación de gran parte del cuerpo legal que regulaba las relaciones de la Iglesia con el poder civil, rompiendo "los cauces jurídicos abierto por siglos de corriente católica dentro del Estado español" y abriendo "enorme brecha, por donde irrumpa el torrente de la irreligión y del laicismo, en lo que podríamos llamar defensas de la ciudad de Dios en nuestra España".

(66) También cabe encontrar esta idea en el documento de 1937. Véase nota y apéndice citados.

(67) Véase el decreto de 20 de agosto de 1931 sobre prohibición de venta de los bienes eclesiástico, a que se refiere BOMA, en la nota 292 del capítulo "La Iglesia ante la República".

Dicho esto y enlazando con los ataques normativos sufridos por la Iglesia en España, se centraba ya el obispo en el tema objeto de su pastoral: el proyecto de Constitución en el que, para él, culminaba "el pensamiento anticristiano de la revolución"⁽⁷⁰⁾ toda vez que repudiaba todo cuanto atañía a la religión. Como dicho proyecto no era obra del gobierno, "que ni siquiera lo ha hecho suyo", permitía la debida libertad de análisis, que el prelado comenzaba centrando en la aconfesionalidad del Estado que diseñaba.

Para la Comisión parlamentaria redactora el Estado era absolutamente soberano, con una soberanía que consentía la eliminación de Dios y de la religión. "Es el Estado Dios que intenta suplantarse a Dios" y, con ello, se le quitaba de una nación que tenía su vida arraigada en El, al tiempo que se suprimía una de las naturales funciones del Estado, cual era la de servir de cauce de relación de la sociedad con la divinidad.

España iba a sufrir con ello "una sacudida brusca, como de organismo que se siente herido por golpe mortal". Frente a tal peligro el Dr. GOMA tenía ciertamente, como expresaba, "fe inquebrantable en los destinos religiosos de nuestra patria", en su "autovitalidad religiosa, y en la providencia y en la gracia de Dios, que no dejará a su pueblo predilecto"⁽⁷¹⁾ pero, bajo el aspecto puramente humano, "este lanzamiento de Dios, elevado a sistema desde el principio del proyecto de Constitución, a más que podría provocar la indignación de Dios si fuera aceptado por el cuerpo de la nación"⁽⁷²⁾ estaba destinado a producir la decadencia irre-

(70) También hay una terminología similar en el documento de 1937. Véase la nota 62 y el apéndice núm. 5.

(71) y (72) Reiteramos lo indicado en la nota anterior.

mediable del país, que habiendo vivido a Dios por espacio de siglos "moriría paulatinamente de inedia espiritual y moral el día que conformara su vida con esta norma del ateísmo oficial del Estado".

El diseño de Estado que consagraba el proyecto -"especie de divinización de una entidad jurídica de orden humano a la que se hace origen frontal de todo derecho"- implicaba, además, "la eliminación de Dios de todos los organismos y actos de la vida nacional", afirmación con la que el Dr. GOMÁ pasaba a referirse a un nuevo tema: la regulación que el proyecto hacía del contrato de matrimonio y su disolución, y esta referencia era tan contundente y genérica que con ella venía el prelado, seguramente sin percatarse, a negar esa pujanza religiosa del pueblo español en la que acababa de proclamar su sólida fe, expresando sus temores de que demasiados católicos pudieran acogerse a las posibilidades que la nueva Constitución podía ofrecerles. El proyecto -decía- desterraba a Dios de la familia, asestando a esta un rudo golpe, "no ya en el orden cristiano, sino hasta en el natural", al conceder a los esposos amplias facultades para el divorcio vincular, por lo que el matrimonio -"si triunfa y se impone en la vida de los españoles el criterio del proyecto"- dejaría de ser algo sagrado para transformarse en un mero contrato civil resoluble por voluntad de los pactantes, "a merced del capricho, de la pasión, del interés...", con lo que se llevaría "un principio de corrupción, que podríamos llamar sustancial, al mismo origen físico de la sociedad."

Sentado así este criterio eclesiástico, que, si lógicamente contrario al divorcio según la doctrina católica, no dejaba de ser humanamente injusto al enumerar las posibles causas que podían conducir a aquél, pasaba el obispo a referirse sucintamente al tema de la enseñanza, sobre el que advertía que al establecer el proyecto una

escuela sin Dios introducía necesariamente una educación sin moral, toda vez que, decía, esta tenía "por único y definitivo soporte la religión". De esta forma, al aprender desde la infancia a prescindir de Dios, los españoles entrarían en la sociedad "por la ancha puerta de la libertad sin freno, y vivir en ella sin más rémora que la fuerza coercitiva de la ley", cortapisa insuficiente al no existir barrera que no se rompiera si no estaba fundamentada en los preceptos divinos.

Más escuetamente aún, pero con no menor contundencia, trataba el obispo el tema de los actos de culto, confundiendo, consciente o inconscientemente, la regulación que sobre ellos establecía el artículo 27 del proyecto (ejercicio privado en todos los casos y para todas las confesiones y ejercicio público previa autorización gubernativa), con la que ese mismo artículo determinaba al proclamar la libertad de conciencia y de creencias y prácticas religiosas, derechos cuyo ejercicio sólo quedaba limitado por el respeto debido a la moral pública. Al enlazar erróneamente ambas regulaciones no se daba cuenta el prelado que llegaba a formular una hipótesis muy poco plausible en la sociedad española de la época, que difícilmente podía admitir una liturgia que pudiera ser, en sí, contraria a la moral pública; claro es que, con mayor probabilidad, de lo que el Dr. GOMÁ quería advertir no era de los peligros de unos actos externos en sí inmorales, sino de la posible inmoralidad de lo que con ellos se quería expresar, encontrando así una forma de poder condenar ante la opinión más allá del argumento de la secular preeminencia-preeminencia sobre la que también parecía expresar sus temores- de la Iglesia católica, la permisibilidad de otros actos de culto ajenos a ella. Se quejaba, así, el obispo de la prevista libertad de cultos, una libertad tan absoluta que, decía, sólo quedaba constreñida por la, para él, dudosa condición de que no se ofendiera la moral, y tal condición

era dudosa porque al admitir como única moral válida, como acababa de expresar al hablar de la enseñanza, aquella que se apoyaba en los principios de la doctrina católica con exclusión de los que pudieran fundamentarse en otros credos religiosos, tales actos solo tendrían el límite de una moral que -en paradójica contraposición, amén de confusa mezcla entre culto y religión- podría "ser inmoral según el culto que prevalezca". A esta equívoca argumentación, carente, además de fundamento sociológico alguno, añadiría GOMÁ, para reforzar la postura contraria a toda libertad religiosa un -esta vez sí- claro argumento: la fe católica, forjadora durante siglos de las costumbres nacionales, tendría los mismos derechos que el "mahometismo", "barrido por nuestros mayores con el esfuerzo gigantesco de siete siglos de epopeya."⁷³

Otro agravante traía, además, para los católicos el comentado artículo 27: la secularización de cementerios que, lejos de ser recintos sagrados, estancias de la resurrección, pasarían a ser (como si tal secularización pudiera por sí implicar un cambio de creencias ajeno a la realidad hispánica o determinar una situación distinta a la que entonces se vivía respecto al destino final de cada ser humano, al introducir lo que para el obispo debía ser, en definitiva, dolorosa "promiscuidad") un simple "almacen de cadáveres donde cada cual aguarda sus destinos definitivos: el musulmán su grosero paraíso; el panteísta, su absorción en el Todo; el espiritista, su reencarnación; el incrédulo positivista, su aniquilamiento y reintegración total a la madre tierra."

(73) Idea de "cruzada" no ajena al documento de 1937. Véase la nota 62 y el apéndice núm. 5.

El proyecto de constitucion no solo disenaba tales regulaciones sino que llegaba a negar "la supremacia de lo espiritual sobre lo temporal", al reducir a la Iglesia a la condicion de sociedad de derecho publico, "a la misma condicion de toda entidad subalterna con respecto a la suprema entidad del Estado", proposicion inadmisibile para el prelado que, para combatirla -quiza con olvido de la epoca de las catacumbas y de la esperanza, tantas veces proclamada, en la divina providencia- propugnaba que la Iglesia debia de tener "libertad para expansionarse, para vivir con el honor que le es debido, para gozar del respeto social que a una sociedad divino-humana se debe", parametros de situacion social perfilados, como se ve, con tintes demasiado humanos y que, al parecer, eran para el incompatibles con el disenio del proyecto. La Iglesia necesitaba ademas esta libertad "para florecer como ella sólo puede hacerlo, en la pompa de su culto, en el esplendor de su arte y de su saber, en las obras insustituibles de su caridad y misericordia, en su influencia de orden social y hasta legal" y con la regulacion proyectada quedaria "a merced de sus adversarios, si lo son los que utilicen y apliquen las leyes del Estado omnipotente y laico que se rocen con la vida espiritual del pueblo", frase con la que el prelado introducía otra de sus confusas argumentaciones en la que no cabe deducir si solo calificaba como "adversarios" a aquellas autoridades publicas que, por sus convicciones, realmente lo fueran, abstraccion hecha de su debido sometimiento a la legalidad vigente en el ejercicio de sus funciones, o si para el eran tales las que cumplieran tal cometido y no las que dejaran de hacerlo, como si toda autoridad publica, por el hecho de serlo, no tuviera que dar cabal cumplimiento a la normativa estatal.

Hablando correctamente de la cuestion de los cultos, el prelado añadiría seguidamente que en lo concerniente al catolico este quedaria confinado -como el de las demas

confesiones- a los templos, "como en Guatemala y Portugal, unicas naciones en que no se consiente el culto publico" y, asi, con la supresión de esas manifestaciones, expresi3n de la fe nacional -que eran, segun describia, "clamorosas y espléndidas, explosi3n secular de nuestras creencias, profundas y matizadas con todo cambiante [sic] de verdad cristiana, concreci3n viva de historia de arte, de tradiciones y costumbres, monumento de gratitud a Dios y a sus santos y rasgo caracteristico muchas veces de la vida local"- se llegaria a alcanzar la finalidad perseguida: acabar con los dias de fiesta dedicados a Dios.

El proyecto tambien atacaba, por ultimo, a las 3rdenes religiosas, que serian disueltas y sus bienes nacionalizados, dándose con ello un rudo golpe "a la enseanza, a la beneficencia, a la expansi3n del *espíritu nacional*" en las misiones, a la ciencia en su acepci3n mas estricta y profunda" sin tener en cuenta que las 3rdenes religiosas eran "verdadero iermento de las sociedades cristianas", antes al contrario "el proyecto las aventa, como si fueran una lacra de nuestra sociedad, e intenta nacionalizar sus bienes, que son tan inalienables como los de cualquier propietario, y que nadie como sus actuales dueños sabra utilizar en pro de la cultura, de la prosperidad nacional, de los pobres, de los enfermos y desamparados, siempre bien recibidos y cuidados con caridad cristiana en las casas de religi3n."

Por todo ello, concluía el prelado, el proyecto de Constituci3n estaba "desplazado de nuestra vida española en el orden espiritual y religioso". Era "una forma nueva,

(74) El subrayado es nuestro. Aqui la idea de "espíritu nacional" se enlaza con la del colonialismo. Véase sobre la terminología utilizada por GORR en esta pastoral lo indicado en la nota 62.

labrada o vaciada con el pensamiento y el ideal fuera de España; más, con un pensamiento y un ideal en absoluta oposición con el pensamiento y la vida general de España":

"Bajo este aspecto no dudamos, siempre desde el punto específico de la religión, en calificar el proyecto de antinatural. Porque aun prescindiendo de la absoluta necesidad de la religión para individuos y naciones, de la verdad de nuestra religión cristiana, de su fuerza para elevar a los pueblos, de su eficacia en orden a los destinos definitivos del hombre, nuestra religión, como elemento informador del pensamiento y de la vida de los españoles en sus relaciones con Dios, es un hecho colosal, secular, que se impone con la fuerza abrumadora de las cosas inconcusas y universales. Y prescindir de este hecho, querer siquiera borrarlo de la ley fundamental del Estado, es, a lo menos, exponerse a la inutilidad de la ley o a inevitables rectificaciones, cuando no empeñarse, desde las alturas del poder, en una lucha titánica con la máxima fuerza de un pueblo.

...

«Empeñarse en que un pueblo, en un momento de su historia, vire en redondo, como se dice, es exponerle a que se estrelle en la prueba, como máquina a la que se obligue a salir de su carril.» (75)

De todos estos defectos adolecía, en definitiva, el proyecto de Constitución que no era otra cosa que "un empujon brusco que se da a la vida nacional para sacarla de su quicio: con pretexto de adelanto y progreso cierto; pero con gravísimo peligro de que, lejos de acelerar su paso, salte fuera del camino de su tradición y de su historia y se

(75) Una vez más llamamos la atención sobre los antecedentes que hay en estos párrafos de las ideas que desarrollaría GOMA en la pastoral colectiva de 1937. Véase la nota 62 y el apéndice núm. 5.

frustren sus destinos." (76)

No podía decirse que el pueblo tenía "soberanía para señalarse a sí propio las rutas de la vida", sobre todo porque estaba claro que el proyecto no traduciría, en el orden religioso, el sentir del alma popular y porque, además, aun en el supuesto de que el legislador "fuese la representación genuina y total del pueblo y de su soberanía", no podía sustraerse a la soberanía de Dios, ni podía "sin loca temeridad, destruir o cambiar los últimos resortes que han sido la razón de la fuerza y como el exponente del valor específico de una nación en el concierto de los pueblos durante muchos siglos"; en el proyecto, en definitiva, se había atendido más "a la construcción de un cuerpo legal de carácter ideal y utópico que a las exigencias de nuestra vida social" plagiando leyes extranjeras que habían querido introducir el laicismo oficial y que ya habían sido modificadas en tal sentido al constatar que no cabía a un país prescindir de Dios, único que hacía a los pueblos grandes y fuertes.

Ante tal situación los católicos no debían dormirse creyendo que la ley sería letra muerta y que la vida religiosa se desarrollaría como siempre, ya que, añadía -demostrando una nueva desconfianza en la pujanza de la fe cristiana española que, por otro lado, tanto destacaba- se había dicho que las costumbres hacían las leyes, pero en el proyecto ello no era así: "en este caso, no, sino que las

(76) Estos "destinos" de España, basados en su religión secular eran, además, según veremos en el párrafo siguiente, lo que la había caracterizado en el conjunto de las naciones. En la pastoral de 1937 -véase la nota 62- diría GONÁ: "El movimiento ha fortalecido el sentido de patria, contra el exotismo de las fuerzas que le son contrarias. La patria implica una paternidad; es el ambiente moral, como de una familia dilatada, en que logra el ciudadano su desarrollo total; y el movimiento nacional ha determinado una corriente de amor que se ha concentrado alrededor del nombre y de la sustancia histórica de España, con aversión de los elementos forasteros que nos acarrearon la ruina". (Véase el apéndice núm. 5).

leyes irán derechas a deshacer las costumbres" quedando fuera de ellas "todo ese inmenso cúmulo de cosas e instituciones que ha creado nuestra santa religión"; así, al no contar con el amparo de las normas que derivarían de una constitución atea "se debilitaría nuestra vida religiosa si no suplieramos la fuerza tutelar de la ley por una actuación más viva y eficaz en todos los órdenes de la vida religiosa," ya que fue al amparo de una "legislación cristianísima" como florecieron las glorias de España. "Nuestra historia nacional carece de soporte si se la vacía de nuestra religión." Y Dios pelagra en nuestra España... -en un peligro que el Dr. GOMÁ describía, pareciendo olvidar el mensaje evangélico, con enlace directo en los principios del Antiguo Testamento- ... desde el momento en que no se le dé en la ley constitucional del Estado el lugar que se le debe y que El tiene derecho a exigir- Dios es el Dios de las naciones y quiere de ellas el reconocimiento público de sus derechos, que están sobre todo derecho y que son el cimiento inmovible de todo derecho."

Para evitar esta serie de males se había escrito la Carta colectiva del Episcopado español, a fin de "conservar el sentido cristiano en nuestra Constitución", y, de acuerdo con ella, debían los católicos colaborar activamente para secundar el propósito de sus obispos, con lo que el Dr. GOMÁ pasaba a centrarse, finalmente, en el objeto del subtítulo de su pastoral, tras la tremendista descripción que había hecho del proyecto constitucional:

"Escriban los que sepan y puedan; hablen a las multitudes quienes tengan autoridad y cultura. En el seno del hogar, en la calle, en la tertulia, expóngase la verdad, que no necesita grandes atavíos para abrirse paso, porque las almas rectas están hambrientas de ella. Difúndanse los

(77) Reiteramos lo indicado en la nota anterior.

periódicos y las copiosas hojas de propaganda"" que tan brizarramente la defienden en nuestros días. En nada empleareis mejor vuestro dinero que en hacerle al prójimo la limosna espiritual de la verdad, por los medios que tengais a vuestro alcance."

Se podía y se debía actuar porque aun no era ley el proyecto de constitucion y porque añadía matizando sus antes tan negativas palabras, aunque no podamos saber si con ello expresaba verdaderas esperanzas o solo pretendia influir en el animo de los diputados y tales - "dudamos mucho que el buen sentido de los parlamentarios lo acepte en su totalidad, dando a un Estado catolico una ley fundamental sin religion y que en muchos de sus puntos iniere grave ofensa a los sentimientos cristianisimos de la mayoría de los ciudadanos españoles".

Junto a la accion, indispensable era tambien orar y mortificarse "porque la oracion y la penitencia atraen la atencion y el poder de Dios sobre nuestras cosas... sabe sacar grandes bienes de los grandes males y... guarda en sus secretos la hora y la forma de los nuevos triunfos de la Iglesia", "" por ello ordenaba

"...rogativas especiales para que Dios ilumine al Cuerpo legislador y para que salga de sus deliberaciones y resoluciones una Constitucion que en nada sea atentatoria a los derechos y fueros de la Iglesia y de nuestra santa religion y en la que se respete el comun sentir y la vida catolica de nuestra España. La oracion publica de nuestras iglesias debiera durar hasta la aprobacion

(78) Sobre las "hojas de propaganda" véase en el epígrafe siguiente la pastoral de GOMA de 10 de octubre de 1931.

(79) No parece aventurado deducir que esta hora habia llegado para GOMA al iniciarse el levantamiento que conduciría a la guerra civil, según se desprende de varios párrafos de su pastoral de 1931. (Véase la nota 62 y el apéndice núm. 5)

definitiva de la Ley constitucional del Estado español. (160)

Muy breve, con un estilo conciso pero en extremo contundente, sería la circular de 30 de agosto del obispo de Salamanca Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE que, pese a sus augurios, también tremendistas, sobre el futuro que depararía a España la nueva constitución, de prosperar el proyecto en debate, no ahondaría, como había hecho GOMA, en dolidas descripciones de la situación político-religiosa del momento ni en el análisis pormenorizado de su desarrollo.

Comenzaba al prelado resaltando la trascendencia de las discusiones que se desarrollaban en el Parlamento, de las que dependían no sólo los intereses de la Iglesia sino también (como si solo quisiera llamar la atención sobre lo inminente y palpable, no entrando, en un primer momento, en posibles conjeturas, negativas o positivas, según los acontecimientos, sobre un futuro a más largo plazo) "el porvenir inmediato de nuestra querida Patria", porvenir que, de prosperar el proyecto en sus propios términos, implicaría "un golpe mortal" para aquellos intereses y, para la nación, como si la fe tradicional de sus integrantes dependiera del reconocimiento oficial de la misma y este reconocimiento fuera, por sí solo, desarrollo vital del pueblo, supondría no solo el claro final de una secular trayectoria histórica sino su definitiva derrumbamiento: "España, interrumpida su historia, menospreciada su fe milenaria y desconocido el sentir de la mayoría de sus ciudadanos, hará el 'viraje histórico' de que hablaba recientemente un parlamentario filósofo, no en verdad hacia puertos de seguridad y de

(160) 29 de agosto de 1931, "Exhortación pastoral ante un proyecto de Constitución, Trabajemos y oremos", BDE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de agosto de 1931, núm. 670, págs. 663-677.

gloria, sino hacia los tristes escollos de su disolución y muerte".

Y ello porque, según el prelado, el proyecto no solo proclamaba el "ateísmo político" sino que también -y esta era una afirmación a todas luces exagerada y errónea- se reconocían idénticos títulos "y hasta mayores" a las religiones falsas que a la verdadera que era, además, la religión nacional; junto a ello se abría brecha en la unidad y la dignidad de la familia al admitirse un divorcio que atacaba "al mismo derecho natural", se dejaba la propiedad privada "a merced de la absorción del Estado" y se negaba el derecho de asociación "para los fines más honestos y elevados que pueda el hombre perseguir sobre la tierra", afirmaciones, estas últimas, que pecaban del mismo grado de errónea exageración ya destacado, no sabemos si por cortedad de interpretación del obispo o por un expreso deseo de sembrar, con sus escuetas frases, la alarma entre sus fieles.

Estas líneas maestras que, según decía, veía en el proyecto, supondrían, de ser admitidas, que "pronto la salud moral de nuestra pobre España daría en lastimosa quiebra", quiebra que agravaría ahora, quizá para sembrar mayor temor en los católicos, ya, sí, a muy largo plazo la ya caótica situación moral que, según el prelado -que pensaría en las nuevas ideas que se difundían, en las "modernas modas", calificadas de licenciosas por la jerarquía, o en los ataques materiales ya sufridos por la Iglesia, tanto a manos de los descontrolados como por la actuación concreta de algunas autoridades locales- se veía surgir en algunos lugares y cuyo brote atribuía a la colera divina:

"Y esa peste que aparece por algún punto de la nación, y que nos hace temblar pensando en lo que habremos merecido y pueda sobrevenirnos de la Divina Justicia, será nada en comparación de esa otra peste moral de errores, odios y libertinaje

desenrenado, de que nos veriamos para mucho tiempo, quizás para siglos, contagiados."

Y puesto que del cielo habia de venir "el aire que se lleve la nube, la luz que guie por caminos de rectitud y acierto a nuestros legisladores, el impulso que con la gracia nos mueva a todos a cumplir nuestros arduos deberes en las presentes horas difíciles", acababa el Dr. FRUOS estableciendo diversos actos religiosos a tal fin y exhortando al clero y fieles a la oración y a la penitencia y, tambien, -mucho mas suave y vagamente que, como hemos visto, hacia el Dr. GOMÁ- a que "dentro siempre del respeto al Poder Publico y por caminos de estricta legalidad, agoten cuantos recursos estén a su alcance para evitar que emane de las Cortes una Constitucion anticatolica", lo cual equivalia a "orar y trabajar por la salud de la Patria".(81)

Al igual que el Dr. Juan PERELLO y POU, obispo de Vich, el de Tortosa Dr. Félix BILBAO OGARRIZA, no se coniformaria con dar publicidad en el boletin de su diocesis tanto al documento colectivo de 25 de julio como al mensaje elevado a las Cortes por su provincia eclesiastica, sino que, aprovechando precisamente la insercion de este ultimo en dicho boletin,(82) se veria obligado a hacer una alocucion personal a sus diocesanos a fin de destacarles los puntos del proyecto de Constitucion contrarios a la doctrina de la Iglesia y de instarles a actuaciones concretas, esencialmente de carácter religioso.

Quizá por influencia del tono de mesura y suavidad que el cardenal VIDAL habia cuidado de dar al mensaje de los

(81) 30 de agosto de 1931, "Circular del Prelado, Ordenando preces por la salud de España", BOE de Salamanca, año 78, 1 de septiembre de 1931, num. 9, págs. 261-263.

(82) Ya hemos destacado en la nota 42 que el boletin eclesiastico de Tortosa fue el primero en publicar, antes incluso que el de Tarragona, el mensaje de la provincia eclesiastica a las Cortes constituyentes.

prelados de la provincia tarraconense a las Cortes, destaca sobremanera el caracter respetuoso y conciliador de este escrito, en vivo contraste con los de los obispos a que acabamos de referirnos.

Como hemos visto que, con caracter general, venian haciendo los distintos miembros del episcopado, resaltaba el Dr. BILBAO la trascendencia de las horas que estaba viviendo la nacion, ya que, tras lo que calificaba como "conmocion natural de un cambio de regimen", las Cortes elaboraban una nueva constitucion que habia de dar "estructura tambien nueva a nuestra querida Patria". lo cual suponía, decia (y con ello venia no solo a valorar la labor tanto de los integrantes de las dos comisiones que habian laborado en anteproyecto y proyecto y la de los propios parlamentarios sino tambien la rectitud de intencion de cuantos habian trabajado y trabajaban en el nuevo texto por dotar a la nacion de un instrumento juridico que le permitiera desprenderse de atavicas singladuras y caminar hacia la modernizacion y el desarrollo), un "trabajo no pequeno de cuantos intervienen en el importantisimo negocio, y creemos tambien que con el buen deseo de todos por asentar los sillares de una España grande y próspera", de ahí que el prelado expresara su deseo de que el acierto acompañara a lo que calificaba como "esta buena voluntad". Voluntad que, no obstante, habia dado lugar a unos textos que el prelado, con una ponderacion exquisita, valoraba negativamente en su regulacion del aspecto religioso:

"Una Comision asesora juridica preparo un Proyecto en el que se advertian ya cambios profundos, comparandolo con la anterior Constitucion del año 76,¹⁸⁷⁶ en sentido -por desgracia- contrario a las

(83) Como se recordará el artículo 11 de la Constitución de 1876, con la que el Dr. BILBAO comparaba la orientación que quería darse a la que sería de 1931 establecía la total confesionalidad del Estado proscribiendo la libertad de cultos

orientaciones catolicas. El Gobierno provisional de la Republica no lo hizo suyo por las distintas ideologias representadas en su seno, y una Comision parlamentaria fue encargada de preparar aquel que habrian de discutir las Cortes.

«Este segundo Proyecto -lo hemos de afirmar con profunda pena- acentua notablemente aquellas discrepancias con la doctrina verdadera, sentando principios cuya aprobacion habria de constituir una equivocacion funesta y un ataque temeroso a los fundamentos de toda tranquila y pacifica convivencia social.»

La razon del enoque que se pretendia dar al nuevo texto la encontraba el obispo no en males propios del cambio politico de España, sino en una crisis de transformacion que se suriria con caracter mundial, crisis que, por los terminos positivos con que la describe, parece asemejar a esas enfermedades de la pubertad que traen aparejado el crecimiento. La sociedad -decia el obispo- estaba enferma y ello hacia surgir, por todas partes, "pruebas del malestar que embarga a casi todos los Estados". Este malestar, no obstante, daba lugar a provechosas consecuencias: "Se sienten ansias de renovacion y está en la mente de todos que hay que ir a cambios profundos y radicales". Mas en el caso de España estas ansias no sabrian ser debidamente encauzadas, ya que si el proyecto presentado a las Cortes llegara a ser

con caracter publico:

"La religion Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado. La Nacion se obliga a mantener el culto y sus ministros.

«Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana.

«No se permitirá, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones publicas que las de la religion del Estado».

(*Leyes políticas españolas fundamentales. 1808-1936*, edición a cargo de Enrique TIerno GALVÁN, Madrid, 1968, páq. 158).

ley fundamental en sus propios términos, las consecuencias para la nación no serían otras que las de dar "un enorme salto atrás en el camino del orden social y del legítimo progreso".

Y ello porque había unas verdades esenciales que unas ideologías, que el Dr. BILBAO entendía derivadas simplemente del "apasionamiento y la ofuscación", podrían ocultar transitoriamente, pero que transcurrido corto plazo seguirían alzándose "enhiestas e inquebrantables":

"La sociedad no puede vivir sin autoridad," que es su forma esencial y como su alma; ni sin familia," bien organizada, que es su célula; ni sin propiedad privada," elemento básico del interés que mueve a producir; ni, sobre todo, sin religión," verdadera que a todas esas cosas vivifica, modera y sostiene."

Estas verdades estaban -según la interpretación del prelado, que obviamente desarrollaba, como sus hermanos en el episcopado, la doctrina eclesial sobre los puntos que acababa de enumerar- ausentes del proyecto de Constitución o, más claramente, este atacaba a todos estos "fundamentos sociales" aunque, como decía, "con aciertos seguramente en otros puntos". Dicho ataque se producía, tal y como el Dr. BILBAO pasaba a explicar:

"A la autoridad, negando su origen divino y privándole así de su dignidad y eficacia (art. 19 y 49); a la familia, destruyendo el vínculo matrimonial con el divorcio (art. 41) y arrebatando a los padres el sagrado derecho de educar a sus hijos (art. 46); a la propiedad, proclamando su gradual socialización y la expropiación sin indemnizar (art. 42, párrafos 2º y 5º); y a la Religión, declarando el ateísmo del Estado (art. 3), desconociendo a la Iglesia católica, a la que engloba con cualesquier otras religiones (arts. 24.25 y 46), y sujetándola al

(84) En bastardilla en el original.

poder civil (art. 24), con lo cual quedaría herida en su misma esencia. Prohíbe también al Estado (art. 24,2º) sostener, favorecer, ni auxiliar económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas, cual si éstas fueran vitandas (prohibición que, de hecho, perjudicaría casi exclusivamente al catolicismo). Tan solo parece que la Constitución proyectada se da cuenta de que existe la Iglesia verdadera, en el párrafo 3º del art. 24, donde dispone que el Estado disolverá las Ordenes religiosas, nacionalizando sus bienes, infligiendo así, de un solo golpe, herida mortal al derecho de asociación para los fines más nobles de la vida y al derecho de una propiedad dos veces sagrada."(85)

La orientación que el proyecto daba en esta forma a cuestiones vitales para la religión y la sociedad había sido ya criticada por el episcopado recordando el prelado como, tras la publicación del primitivo proyecto, aquél había levantado su voz en un documento colectivo y cómo al conocerse el definitivo los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona habían dirigido un "atento Mensaje a las Cortes", documentos cuya lectura encarecía por explicitarse en ellos, decía, alejándose de imperativos dogmáticos relativos a la religión verdadera y basándose en un pragmatismo que a todos podía convencer, "una doctrina de salud profesada por más de trescientos millones de fieles y contrastada por veinte siglos de gloriosísima experiencia." Una vez meditados estos documentos los católicos deberían pasar a reflexionar sobre lo que debían hacer ante el proyecto de constitución y, para instarles a la acción, el obispo, aquí sí, pasaba a describir con exagerados tintes las consecuencias que su aprobación podría acarrear, movido por el indudable propósito de provocar, ante el temor, la reacción de los fieles en igual estilo que acabamos de ver seguido por otros miembros de la jerarquía para acabar

(85) Para el contenido de la mayor parte de los artículos que el Dr. BILBAO cita nos remitimos al texto del proyecto reproducido en la nota 39.

instando, con apoyo precisamente en el régimen de libertades y en los principios democraticos, que tan criticados eran por otros preladados -singularmente por el Dr. GOMA- a una accion en el juego respetuoso que el nuevo régimen permitia y haciendo abstraccion de esa terminologia de "amigos" o "enemigos" que hemos visto utilizada por otros hermanos suyos en el episcopado:

"No os engañéis juzgando que se trata de un pleito político que os toca muy poco o de lejos. Las consecuencias para vosotros mismos, para vuestros hijos, y desde luego para millones de vuestros hermanos, pueden ser inestisimas. En el orden individual, graves peligros para la fe, privacion de poderosos y necesarios auxilios espirituales, escarnio y desprecio de lo que mas amais: en el familiar, el desquiciamiento y ruina del hogar y la deformacion monstruosa del alma del niño con la escuela laica obligatoria; en el profesional, la falta de trabajo o la tirania de agrupaciones que os convertiran en sus esclavos; en el social, luchas encarnizadas, la inseguridad de bienes y personas, trastornos, el caos. Algo de esto se está viendo ya en diferentes naciones, pero, con la nueva legislacion, los inestos microbios de estos males se multiplicarian prodigiosamente en nuestra patria, como puestos en apropiado caldo de cultivo.

«Sentamos espanto ante peligros tan graves y actuemos con el vigor que pide su inminencia, aunque tambien con la serenidad que nos da lo inmortal de nuestra fe, y con el espiritu de caridad y de orden que es alma de nuestra moral. Nada de violencias y menos de malquerencias y odios, pero nada tampoco de cobardias, ni dejacion de derechos para salvar lo que a todos, incluso a los colocados frente a nosotros, interesa. Dentro de la mas estricta legalidad siempre, con leal acatamiento a las autoridades, recabemos nuestros derechos ciudadanos. Estamos en régimen de libertad: usemos la nuestra; vivimos en régimen democratico, en que se dice que el pueblo manda: pues pueblo sois los fieles catolicos, y pueblo numeroso, aunque sean muchas las defecciones y muchos los tibios."

Este último pensamiento del prelado sobre la ambigüedad de la religiosidad vivida por muchos de los que se tenían por creyentes daría pie, precisamente, a uno de los planteamientos más lúcidos del episcopado sobre las posibilidades de decantación que los hechos podían producir, expresando una positiva opinión acerca de tal hipotética decantación:

"Acaso una de las ventajas de esta situación sea depurar nuestras filas. Hay católicos a medias, por desgracia, que con su falta de lógica son estorbo para muchas cosas. Allá en el fondo de sus almas tienen fe, y ciertas ráfagas de sentimentalismo piadoso les hacen tenerse por católicos de veras. Pero no conocen bien la religión y abrigan sobre ella las ideas más extrañas e imprecisas. No desdeñaremos su concurso, pues toda colaboración es de agradecer, aun la de aquellos que conserven este ligero bagaje espiritual, con ciertas ideas fundamentales de rectitud y orden cristiano. Pero hemos de trabajar por ilustrar esas conciencias, pidiendo al Señor que el espolnazo de los acontecimientos presentes les haga decidirse por una posición más definida y franca."

El programa que a continuación aconsejaba el obispo seguir a los fieles para lograr este propósito se resumía en las siguientes coordenadas: la oración por "las actuales necesidades"; la penitencia, ya que "cuando afligen calamidades y se temen casos adversos, la penitencia aplaca al Señor"; la limosna, pues era sacrificio que también agradaba a Dios y la generosidad movía su corazón necesitando la Iglesia medios para atender a los fines que era preciso desarrollar en aquellos momentos: "obras de caridad, obras de religión, de organización católica, de cultura social, labor de propaganda sana contra el diluvio de prensa envenenadora, están pidiendo caudales fuertes, que puedan ahogar el mal con la abundancia del bien"; la revalorización del catolicismo, de forma que el momento que se vivía sirviera para espolear a los que pudieran haberlo descuidado, estimulándoles a la unión con sus hermanos y a

la obediencia a la jerarquía; el repaso del catecismo, pues "gran parte del mal que deploramos en el presente estado de cosas se origina de la ignorancia de la doctrina cristiana", siendo singularmente parte de actualidad en ella la relativa a la Iglesia, "sociedad divina, perfecta, soberana y beneficentísima, tan desconocida por muchos de sus hijos".

A este programa añadía el Dr. BILBAO la exhortación de que los fieles se abstuvieran de leer "escritos peligrosos", ya que al desconocimiento de la doctrina católica había que añadir, por parte de muchos, "errores graves debidos principalmente a lectura de periódicos y escritos resabiados o malos". La Iglesia tenía acerca de ello "una legislación sabia, de higiene intelectual" por la que disponía que nada referente a fe y a costumbres pudiera publicarse sin licencia eclesiástica, previa la oportuna censura; a tal deber de autores y editores correspondía el de los fieles de no leer tales escritos "ya que fundamentalmente pueden presumirse malos, puesto que desacatan una ley eclesiástica grave y que, además caían "casi siempre" en alguna de las prohibiciones que establecía el canon 1399, en cuyo caso no podían lícitamente leerse, retenerse, ni circular."⁶⁶ La

(86) En nota a pie de página el prelado recordaba las prohibiciones decretadas por el canon citado:

"Están prohibidos por el mismo derecho -o sea sin necesidad de declaración o sentencia- entre otros; 22 los escritos que defienden herejía o cisma, o tratan de destruir de cualquier modo los fundamentos de la religión; 32 los que atacan a la religión o buenas costumbres; 42 los que impugnan o ridiculizan cualquiera de los dogmas católicos, defienden errores condenados por la Sede Apostólica, difaman el culto divino, atacan la disciplina eclesiástica, o de propósito atacan a la jerarquía eclesiástica, al estado clerical o al religioso; 89 los que afirman ser lícito el duelo, el suicidio o el divorcio, o presentan como útiles, y no como perniciosos a la Iglesia y a la sociedad civil, las sectas masónicas y sociedades parecidas; 92 los que de propósito tratan, narran o enseñan cosas lascivas u obscenas".

Para el Dr. Félix BILBAO el panorama de la prensa del momento era meridiano ya que concluía esta nota manifestando: "Véase por esto cuán pocos serían los periódicos, revistas, etc., sin licencia, que no incurran en alguna de estas prohibiciones."

experiencia de muchos católicos era, por otra parte, suficiente para saber lo que, según el obispo, era desconocimiento de estas leyes de la Iglesia, ya que tales católicos leían "sin escrúpulo y se suscriben a publicaciones que son veneno de sus almas". Abundando en esta idea, que, de acuerdo con el sentir de la Iglesia de la época, negaba toda capacidad de juicio crítico de los creyentes, en tales lecturas se hallaba "el origen principal de la desorientación, prejuicios y errores que en materia religiosa pululan por el mundo", de ahí que declarara como conclusión que "el día en que los fieles se convenzan de que no pueden leer escritos que se refieran a esta materia de fe y costumbres que no se hallen debidamente aprobados, se habrá dado un paso de gigante en el camino de nuestra regeneración."

Tras aconsejar, por último, la realización de las prácticas piosas -tanto obligatorias como aconsejadas- con mayor esmero, estimulados por las circunstancias que se vivían, pasaba el obispo a invitar a sus diocesanos a realizar actuaciones concretas secundando las instrucciones de la nunciatura:

"Dado el momento presente y siendo vital que la nueva Constitución se haga a la medida de la verdadera España, sin sectarismos que la opriman y ahoguen, haciendo de ella una manzana de discordia y un instrumento de persecución, procuremos contribuir a ello con los medios particulares de que cada cual disponga, ya actuando cerca de los señores Diputados, ya dirigiendo mensajes o telegramas a las autoridades superiores, ya influyendo de cualquier otro modo que la prudencia aconseje, haciendo patente el deseo de que nuestra divina Religión sea respetada, llegando a un Concordato con la Santa Sede, que atendería benignamente cualquier indicación razonable, y recabando el mismo respeto para los demás fundamentos sociales, antes enumerados."

Finalmente, y para cooperar a cuanto había expuesto, establecía diversos actos de culto que -a diferencia de los de carácter genérico determinados por los escritos de los prelados hasta ahora examinados- especificaba deberían realizarse expresamente "por la libertad y necesidades de la Iglesia, nuestra madre" y aconsejaba a los sacerdotes que, "con toda discreción", ilustraran a los fieles sobre las materias relacionadas con las necesidades entonces vividas por la Iglesia, basándose para ello en los oportunos documentos episcopales y pontificios.

Como última expresión de la mayor preocupación que sentía el obispo: la defensa de la Iglesia como tal y con carácter global frente al proyecto de constitución, sin insistir en regulaciones concretas de este contrarias a los principios de aquella -si bien en la defensa de las características de la autoridad de la doctrina eclesiástica iban subsumida, obviamente, la condena de tales regulaciones- finalizaba el Dr. BILBAO decretando que en los actos de culto se recitara un texto relativo a la Iglesia que incluía como apéndice a la pastoral "como repaso -dada la carencia de conocimiento por parte de los fieles que antes había denunciado- de las enseñanzas de la doctrina sobre la materia". (87)

(87) 6 de septiembre de 1931, "Alocución Pastoral al Clero y a los fieles diocesanos", BOE de Tortosa, año 73, 7 de septiembre de 1931, núm. 15, págs. 277-282.

El texto relativo a los puntos de doctrina sobre la Iglesia era el siguiente:

1. La Iglesia Católica fue fundada personalmente por Jesucristo Nuestro Señor.
2. Es una sociedad perfecta y soberana, para la salvación de las almas.
3. Tiene por cabeza visible al Romano Pontífice, Vicario de Jesucristo.
4. Es gobernada por el Papa y los Obispos, auxiliados por los sacerdotes.
5. La Iglesia es depositaria del Dogma, e infalible en su enseñanza.
6. Es depositaria de la Moral. Sólo ella posee todo el tesoro de la moral verdadera.
7. Es depositaria de la Gracia, que comunica por los Santos Sacramentos.
8. La Iglesia tiene plena potestad legislativa, judicial y coactiva.
9. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica.
10. La Iglesia Católica Romana es la Única verdadera Iglesia de Jesucristo.

6. Las exhortaciones genéricas sobre la situación de España anteriores a los debates de la cuestión religiosa en las Cortes: obispos de Coria, Tarazona (administrador apostólico de Tudela) Urgel, Astorga, Pamplona, Zamora, Tuy, Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Ávila, Palencia, Gerona, Calahorra y La Calzada, Granada, Santiago de Compostela, Huesca y Toledo.

Si, como hemos visto, varios miembros del episcopado se preocuparon de dirigirse a los fieles al objeto de orientarles y exhortarles a concretas actuaciones ante el proyecto de la nueva constitución y su debate en las Cortes, otros, por estas mismas fechas, soslayaron el tema en las pastorales y circulares entonces escritas o sólo se refirieron a él en forma incidental, bien porque dichas pastorales y circulares fueran de estricto carácter religioso sin alusión alguna a los históricos momentos que se vivían⁽⁸⁸⁾ o bien porque, revistiendo tal carácter, más

el cristianismo integral, la Religión en concreto.

11. La Iglesia consta hoy de más de trescientos millones de fieles, esparcidos por todo el mundo, unidos en la misma fe, participantes de los mismos Sacramentos, obedientes a la misma autoridad.
12. La Iglesia cuenta con veinte siglos de existencia, en los cuales ha superado las pruebas más atroces y perfidias.
13. La Iglesia es como el arca en el diluvio; fuera de ella no hay salvación.
14. El título más glorioso es ser hijo de la Iglesia.
15. La Iglesia y el Estado se complementan. La Iglesia encamina al alma a la vida eterna y el Estado cuida del bien temporal.
16. De que la Iglesia y el Estado se respeten y ayuden, surgen inmensos bienes para ambas sociedades.
17. El buen hijo de la Iglesia será ciudadano modelo, obediente a la autoridad y a las leyes justas, enemigo de rebeldías y desorden, cumplidor estrupestoso de sus deberes profesionales y ciudadanos.

«¡Amemos, obedezcamos, defendamos, honremos a la Iglesia nuestra Madre!»

(88) Tales serían, entre la documentación consultada, las suscritas por los prelados de Vitoria (8 de septiembre de 1931, "Circular núm. 109, El Mes del Sacratísimo Rosario", BOE Vitoria, año 67, 15 de septiembre de 1931, núm. 20, págs. 616-620 y 24 de septiembre de 1931, "Circular núm. 110, El Día Universal de la Propagación de la Fe y la Festividad de Cristo Rey", BOE de Vitoria, año 67, 1 de octubre de

se ocuparan de una genérica alusión a la situación socio-religiosa de España que al específico tema de los debates constitucionales. Junto a ellos hay que refe-

1931, núm. 21, págs. 629-634); Zaragoza (9 de septiembre de 1931, "Circular sobre el mes del Rosario", BOE de Zaragoza, año 70, 16 de septiembre de 1931, núm. 18, pág. 405), Orihuela (15 de septiembre de 1931, "Circular sobre el Santo Rosario" y "Circular sobre la Fiesta de Cristo Rey", BOE de Orihuela, año 50, 16 de septiembre de 1931, núm. 16, págs. 297-299); Córdoba (20 de septiembre de 1931, "Circular del Prelado sobre el mes del Rosario", BOE de Córdoba, año 74, 26 de septiembre de 1931, núm. 13, págs. 239-242); Barcelona (24 de septiembre de 1931), "Carta Pastoral de Su Excelencia Reverendísima al clero y fieles de la Diócesis de Barcelona: El Santo Rosario y los males presentes", BOE de Barcelona, año 74, 26 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 553-562); Segovia (29 de septiembre de 1931, "Exhortación Pastoral: Maravillas del Rosario", BOE de Segovia, año 76, 30 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 381-385 y 14 de octubre de 1931, "Exhortación Pastoral: La soberanía de Jesucristo", BOE de Segovia, año 76, 15 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 409-413); Oviedo (1 de octubre de 1931, "Circular de la Secretaría de Cámara y Gobierno: El Mes del Rosario", BOE de Oviedo, año 67, 1 de octubre de 1931, núm. 19, pág. 285 y 15 de octubre de 1931, "Circular de la Secretaría de Cámara y Gobierno: La Fiesta de Jesucristo Rey", BOE de Oviedo, año 67, 15 de octubre de 1931, núm. 20, pág. 295) y Málaga (a.f. "Circular acerca de la fiesta de Cristo Rey", BOE de Málaga, año 64, 15 de octubre de 1931, núm. 11, págs. 391-392).

Si, como hemos indicado el cardenal ILUNDAÍN había sido el primero en referirse, ya el 2 de agosto, a la necesidad de elevar oraciones por la futura constitución (véase la nota 27 de este capítulo), en estas fechas inminentes de los debates constitucionales, y a pesar de que el mensaje elevado a las Cortes por su provincia eclesiástica no había sido publicado, a diferencia del de Terragona, en el boletín eclesiástico, se limitaría a escribir una breve pastoral sobre el rezo del rosario de exclusivo carácter religioso (septiembre de 1931, "Pastoral sobre el mes del Rosario", BOE de Sevilla, año 74, 18 de septiembre de 1931, núm. 1188, págs. 317-318).

Más prolífico que el cardenal ILUNDAÍN sería el obispo de Ávila, Dr. PLA y DENIEL que, habiendo suscrito el 25 de agosto una circular sobre el proyecto de constitución (véase la nota 60), se referiría sucintamente a las circunstancias políticas en su circular de 22 de septiembre, a fin de aconsejar al clero las debidas cautelas en la predicación (véase la nota 103) y, sobre todo, trataría extensamente de la situación político-religiosa de España en su pastoral del día 29 del mismo mes (véase la nota 105). No obstante, a pesar de estar elaborada en las mismas fechas cercanas al debate constitucional de la cuestión religiosa, y quizá por pensar referirse ampliamente a la relación de Iglesia y sociedad en la citada pastoral del día 29, en la circular que suscribió para hablar de la práctica del rezo del rosario, se limitó a referirse brevemente a las celebraciones litúrgicas y oraciones a realizar en relación con dicha práctica (20 de septiembre de 1931, "Circular sobre el Santísimo Rosario en el mes de octubre", BOE de Ávila, año 42, 30 de septiembre de 1931, núm. 11, págs. 425-426).

rirse también a los que, aun cuando habían hablado ampliamente de la etapa constituyente, no dejarían de aprovechar la oportunidad que les ofrecía el tener que referirse a alguna festividad o práctica religiosa de esas fechas para seguir abundando en la cuestión, dar instrucciones o expresar su parecer sobre la situación religiosa que en aquellos momentos vivía España.¹⁸⁹

También a pesar de la fecha de septiembre en que viene firmada, la circular sobre el mes del Rosario del obispo de Pamplona, Dr. MURILZ PABLOS —que el día 14 del mismo mes, al tratar de las obras del nuevo seminario, había aludido con negros tintes al porvenir de la Iglesia en España (véase la nota 97) única referencia de su pluma, y aun incidental, a los momentos que se atravesaban— se teñiría a establecer los cultos religiosos a celebrar en octubre (26 de septiembre de 1931, "Circular sobre el mes del Rosario", BOE de Pamplona, año 70, 1 de octubre de 1931, núm. 1718, págs. 393-394).

La circular sobre el mes del Rosario firmada por el obispo de Palencia Dr. PARRADO GARCIA el 23 de septiembre trataría en forma concreta y al contrario que las de los prelados a que acabamos de aludir, de los debates constitucionales para describir las estipulaciones del proyecto contrarias a la Iglesia y a su doctrina y pedir oraciones a sus fieles. No obstante, la escrita pocos días después con motivo de la festividad de Cristo Rey, a pesar de ser las vísperas del debate de la cuestión religiosa en las Cortes, sería de exclusivo carácter religioso sin referencia alguna a las trascendentes fechas que se avecinaban (5 de octubre de 1931, "La fiesta de Jesucristo Rey", BOE de Palencia, año 81, 9 de octubre de 1931, núm. 22, págs. 651-652).

Para acabar con esta relación referente a los prelados que por estas fechas se limitaron a tratar temas de carácter doctrinal sin alusión alguna a la situación político-religiosa del momento hemos de indicar, por último, que si bien, y como antes señalamos, el obispo de Mallorca Dr. MIRALLES y SBERT, fue uno de los primeros en referirse al proyecto de constitución y exhortar a sus fieles a orar en pro de una norma fundamental acorde con el sentir de la Iglesia (véase la nota 29), en los días cercanos a los debates en las constituyentes de la cuestión religiosa y aun transcurridos estos, guardó total silencio y así, todas sus pastorales sobre los cíclicos temas doctrinales que trataba la jerarquía (devoción del rosario en el mes de octubre, fiesta de Cristo Rey, Adviento...) fueron de único y exclusivo contenido religioso sin la más mínima referencia a la situación de España, entoque que en esta clase de pastorales reiteraría en los años 1932 y 1933. El proceder seguido por el Dr. MIRALLES lo encontramos también en el obispo de Madrid, Dr. ELLI GARAY que, o bien trató los periódicos temas doctrinales con pastorales de exclusivo entoque religioso, o bien se refirió a ellos por simples notas-circulares.

(89) Como hemos visto la actuación del cardenal VIDAL fue justamente la contraria pues habiendo examinado y presentado a los fieles el tema del proyecto de constitución por el sistema de dar publicidad al mensaje elevado por su provincia eclesialística a las Cortes constituyentes había aprovechado precisamente la circular de

En este amplio segundo grupo cabe situar las exhortaciones suscritas a lo largo de los meses de septiembre y octubre por los prelados de Coria, Iruya (administrador apostólico de Tudela), Urgel, Astorga, Pamplona, Zamora, Iruya, Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Avila, Palencia, Gerona, Calaborra, Granada, Santiago de Compostela, Huesca y Toledo.

Para el Dr. D. Dionisio MORENO BARRIO, obispo de Coria, dos efectos muy diferentes se habian observado en los catolicos españoles "a la vista de los ataques violentísimos que con tan certera eficacia se han dirigido en estos últimos tiempos a los principios morales, sociales y religiosos", según exponia en la circular que para aconsejar a sus fieles la constante practica de la oracion, dada la dedicacion del inmediato mes de octubre a difundir el rezo del rosario, suscribiera el 8 de septiembre de 1931 y en la que trataba esencialmente de la que, a su juicio, era la situacion religiosa que en aquellas fechas existia en España, instando, en base a la descripcion que de ella hacia, a la revitalizacion, tanto publica (con el indudable proposito, desarrollado a lo largo de la circular, de que sus contradictores vieran la pujanza y numero de los que se consideraban creyentes) como privada del catolicismo.

Para el Dr. MORENO -que, en una beatifica vision de tiempos preteritos, olvidaba en sus trases negras epocas pasadas de la historia española a las que no era precisamente ajena la Iglesia, con el probable proposito de pergenar lo que, bajo ella, debia ser una idilica convivencia de

presentación de dicho mensaje para referirse a la cercana devoción del rezo del rosario, (véase la nota 42), no volviendo a suscribir a partir de esa fecha ninguna nueva exhortación hasta el 3 de diciembre de 1931, día en el que suscribía una circular relativa a la festividad de la Inmaculada y a las colectas para el sostenimiento del culto y clero ("Circular sobre la colecta de culto y clero y oración 'pro quacunque necessitate'", BDE de Iruya, año 67, 3 de diciembre de 1931, núm. 24, págs. 466-471).

todos los ciudadanos y que ahora venía a romperse como consecuencia de las actuaciones políticas del nuevo régimen- los fieles que valoraban "cuanto durante veinte siglos ha venido produciendo el catolicismo en favor de nuestra querida Patria, promoviendo la cordialidad entre todos los elementos que deben colaborar a su engrandecimiento, no luchando entre sí, como enemigos irreconciliables, sino ayudándose mutuamente", se habían alarmado ante el peligro de perder los frutos que había producido, y siempre produciría, la religión, mostrándose, por ello "dispuestos a defender con su palabra, con su influencia y sus escritos la libertad del catolicismo y de todas sus beneméritas instituciones".

Junto a ellos había otros -"no escasos en número"- que "aturdidos por el estrépito de la tempestad desencadenada", habían escondido sus creencias sin atreverse "a dar testimonio y pruebas exteriores de lo que piensan y creen en su interior". Y los que así hacían causaban un grave daño al hacer pensar que los católicos no eran tantos o estaban en minoría, cuando eran, precisamente (pues también a estos le interesaba al obispo, contradictoriamente, incluir) la inmensa mayoría de los españoles; a este daño se unía la consiguiente y personal responsabilidad hacia los más inocentes (con un mismo rasero medía el obispo, nuevamente con la idílica y bienintencionada ceguera de muchos miembros de la jerarquía, al "pueblo" y a los niños) y hacia la posibilidad de derrumbamiento de una fe, que si tan fácilmente podía desaparecer por la actuación de los "tibios" no debería considerar el obispo tan arraigada como quería, a la vez, dar a entender.

"La licencia con que se oye blasfemar de lo más santo; el abandono que se muestra del cumplimiento de los deberes religiosos el día del Señor; los ataques teóricos y los atropellos prácticos al derecho de propiedad y a la libertad de las conciencias; el ansia con que se devoran las invenciones de la prensa impia; el desdén hacia los ministros de Jesucristo y sus más fieles

seguidores, los Religiosos, todo ese aluvión de principios corrosivos del orden sobrenatural, va minando el edificio de la fe en el alma de los niños y del pueblo; y cuarteado así el edificio, se derrumbará fácilmente al primer sople de la persecución del interés."

De ahí que, haciendo abstracción de otras consideraciones que podían mover a aquellos católicos que querían conciliar fe y nuevos planteamientos sociales, lo urgente para el prelado era que los que actuaban según había descrito no creyeran tan sólo "en el interior de las conciencias", sino que practicasen "con valentía" -como si tan solo se tratara de una cuestión de valor- los mandamientos de la Iglesia y participaran publicamente (¿para demostrar el número?) en los actos de culto, "desde la misa obligatoria del domingo hasta la función voluntaria del día de trabajo", actitud que debían fundamentar comenzando por instruirse en el catecismo, lo cual debían hacer tanto respecto a sí mismos como a sus hijos y ello porque había de seguirse "un acoplamiento moral de todos nuestros actos a la regla moral de nuestro Evangelio", principio que afectaba a todos los órdenes de la vida, según la interpretación dada por los pontífices:

"Tanto en las relaciones del patrono con el obrero, como en las doctrinas de la justicia y la caridad; en la educación de la juventud, como en la conducta política, es un deber ineludible acomodarse a las inflexibles normas Pontificias tan claramente expuestas en luminosas Encíclicas que todos debieran conocer, estudiar y propagar."

Para la revitalización del catolicismo que el obispo entendía necesaria convocaba especialmente a la Acción Católica, que debía laborar con pujanza en todas las parroquias, pues "si cada día -decía, extrapolando al clero parroquial unas previsiones infundadas- se coarta más la

libertad de accion del clero", preciso era que los seglares se incorporaran al apostolado jerarquico "hasta conseguir -añadia, con juicio pesimista sobre la situacion de los creyentes- que el catolicismo sea en todos nosotros no una sombra ficticia o un recuerdo vago de ideas imprecisas, sino una realidad viva de principios que regulando todas nuestras acciones vaya produciendo en nosotros la virtud y la santidad", empresa esta que exigia una "decision inquebrantable nacida de una conviccion firmisima, fruto de una fe practicada con amorosa perseverancia" y que, para asegurar la eficacia del esfuerzo, precisaba el recurso a la Madre de Dios, puesto que era la que (y en estas frases podria encontrarse implicita la opinion del prelado sobre los momentos que, por causas socio-politicas, vivia Espana) habia "destrozado todas las herejias en todo el mundo;...concediendo inesperadas victorias contra poderosissimos ejercitos; ... renovado la de las naciones despues de los mas horrendos cataclismos espirituales; ... resucitado campeones de la fe en Jesucristo que con el asombroso poderio de sus palabras y de sus ejemplos arrastraban las multitudes a destrozr lo que adoraban y a adorar lo que destrozaron". Y puesto que la fe de los espanoles se hallaba "acometida de peligros evidentes", era obligada la necesidad de acudir a la patrona de Espana "si queremos que salga triunfante en la rudisima batalla". con suplicas que deberian redoblarce en octubre, mes dedicado a la devocion del Rosario, para impetrar su intervencion "no destruyendo a los pobrecitos infelices que en su lamentable ceguedad se empenan en destruir la roca incommovible de la verdad revelada; sino iluminandolos con la abundantisima luz de la fe y atrayendolos con la irresistible fuerza del amor, a dar testimonio voluntario de su equivocacion con su arrepentimiento y enmienda sincerisima". frases, estas ultimas que, aunque no exentas de una caridad que no aparece reflejada en los textos de otros miembros de la jerarquia, no dejaban de implicar, en sus calificativos, un

paternalismo exagerado y una vision unilateral de la re
 dificilmente aceptable por los que se veian como catolicos
 liberales o progresistas, sobre todo teniendo en cuenta que,
 como cierre de eillas, anadia el obispo un juicio en el que,
 incluso, se atrevia, sin advertirlo, a cuestionar la
 misericordia divina: "No merecen ellos ciertamente esa
 gracia; pero por eso precisamente para merecersela nosotros
 hemos de redoblar nuestras suplicas, nuestra caridad, y
 nuestras penitencias."

Y puesto que el rezo del Rosario habia conseguido -como
 recordaba citando, entre otros hitos historicos, la victoria
 de Lepanto- importantes logros de la cristiandad, debian
 todos aprestarse a rezarlo para "experimentar el poderio de
 nuestra excelsa madre."

"Es verdad que los pecados de España, tan
 numerosos y tan graves, tan continuados y tan poco
 o nada reparados con la penitencia, levantan un
 muro de bronce entre nuestra necesidad y su
 bondad; pero pueblo que medite y rece y cante el
 Rosario, no puede menos de sentirse
 irresistiblemente inclinado a pagar a la divina
 justicia las deudas propias y las ajenas con
 penitencias espontaneas; pueblo que rece bien el
 Rosario no puede ver imposible que desaparezca del
 corazon de sus niños la re cristiana, venero
 inagotable de toda idea noble y grande, fuente
 inexhausta de santidad, y regla unica de moralidad
 estable.

"...no puede permanecer indiferente ante las
 dificultades amontonadas a la Iglesia y a las
 Ordenes religiosas para cumplir siempre y en todas
 partes y con todas las personas su mision de paz y
 de instruccion, de caridad y de beneficencia, de
 amor y de suirimiento; porque sabe ... que le
 aguarda tras de breve lucha un triunfo intermina-
 ble." 190.

(80) Se reitera aqui la idea del próximo "triunfo", si bien referido en este caso al
 conjunto de fieles y no a la Iglesia como institución -como parece desprenderse de
 las palabras de GOMA- y en un contexto de arrepentimiento y perdón distinto de la
 idea de resistencia expuesta por el obispo de Tarazona (véanse las notas 64, 66,
 75 y 79).

De ahí que -siguiendo con su idea de la publicidad del culto- recomendará, como final, que donde fuera fácil cantar procesionalmente por las calles se siguiera esta práctica, o se fuera a algún santuario de especial devoción, efectuándose "la más solemne y devota rogativa de desagravio y acción".

Otras dos diferentes cuestiones preocupaban, por último, al Dr. MORENO: las vocaciones eclesiásticas, sobre las que opinaba, con sombría visión quizá no exenta de realismo, que "las actuales circunstancias han de influir de un modo tristísimo," y, por ello, establecía rogativas para su fomento, al ser "problema de capitalísima importancia para la vida cristiana de los pueblos el que haya sacerdotes suficientes en la diócesis", cosa que no ocurriría -y aquí introducía un argumento de índole presupuestaria que poco tenía que ver con la necesidad del fomento de vocaciones-⁽⁵¹⁾ "si a los pobres que anhelan venir al seminario nos vemos precisados a cerrarles la puerta por falta de recursos materiales con que alimentarlos"; ya que si doloroso era -y esta era la otra cuestión que inquietaba al obispo -que sucumbiera la prensa católica, mayor era que faltasen sacerdotes.

Por todo ello los fieles debían meditar si habían "dado a Dios lo que en las presentes circunstancias exige su gloria", pues todos, según sus posibilidades, debían contribuir al sostenimiento de la prensa católica y del seminario que eran "los baluartes más necesarios para la defensa de nuestra fe, y aun para el sostenimiento de los

(51) La referencia a la necesidad de ayuda económica para el seminario hay que enmarcarla en la tradicional petición de colaboración económica de la jerarquía a los fieles para el sostenimiento de esta obra y no en una especial carencia de medios provocada por la República en esas fechas. El problema de la supresión del presupuesto del clero, cuyo tratamiento excede de los límites de esta tesis, no comenzaría a surgir hasta la aprobación del que sería artículo 26 de la Constitución, como expondremos más adelante.

principios en que se asienta el orden y la prosperidad material", temas ambos que, como tantos otros prelados, el obispo destacaba y ligaba, como se ve, al triunfo de los principios religiosos, de ahí que acabara, con humilde frase, esperando de sus diocesanos "el urgente socorro de vuestra caridad".⁽⁹²⁾

Aprovechando también la pastoral que escribiera con motivo de la devoción al rosario, no dejaría el Dr. GOMA de reiterar a sus diocesanos su juicio sobre la situación que atravesaba España y, así, exhortaba a la oración mariana por cuanto, decía, "Vivimos días de prueba, de grandes peligros para la fe y la piedad de nuestro querido pueblo", fe de la que, al igual que el Dr. MORENO, lamentaba "su disminución en nuestros días", pese a lo cual añadía con impresión contraria a la de este y tras extensas consideraciones relativas a la intervención de Dios en todo cuanto acontece a los hombres y a los pueblos, que "en medio de los ataques furiosos de que es objeto en nuestros días nuestra santa Religión y hasta las verdades de la fe que la sostienen y vivifican, hemos tenido el consuelo ... de ver que en nuestra Diócesis se ha notado una fuerte reviviscencia de la fe; como si los hombres, espantados ante el abismo a que fatalmente van a parar los pueblos sin religión se cogiesen instintivamente a las prácticas salvadoras de la que nuestros padres nos legaron", razón por la que, también con distinto enfoque que el del Dr. MORENO -pues con igual énfasis recomendaba la práctica privada que la pública, respecto a la cual más se refería a las costumbres que, como hacia aquél, a los posibles obstáculos- aconsejaba el rezo del rosario "a solas, en familia, con el pueblo congregado

(92) 8 de septiembre de 1931, "Circular núm. 34. Orad sin descanso: Sine intermissione orate", BDE de Coria, año 76, 16 de septiembre de 1931, núm. 16, págs. 277-281.

en la casa de Dios o recorriendo vuestras calles en procesión devota, como todavía es costumbre en algunas de nuestras localidades", si bien no dejaba de exaltar los beneficios que, según la Iglesia, se derivaban de la oración en común, razón por la que, aun constatando que la práctica del rezo del rosario en familia había decaído, la establecía en las parroquias durante todo el mes, "aunque sean contadísimas las personas que a esta práctica acudan" dado que "nuestra España atraviesa días de prueba", motivo por el que decretaba que esta práctica religiosa se aplicara de manera especial por las intenciones que señalaba en su pastoral de 29 de agosto,⁽⁹³⁾ exhortando finalmente a que los sacerdotes expusieran "con sencillez al pueblo" las excelencias de esta oración instándole a conservarla o a reanudarla si se hubiese olvidado su práctica.⁽⁹⁴⁾

Con una somera revisión a la instrucción dictada en 1929 sobre "El rezo del Santo Rosario, jornada misional y fiesta de Cristo Rey", el obispo de Urgel, Dr. Justino GUITART y VILARDEBO, no dejaría de constatar que "las difíciles circunstancias del momento hacen tanto más necesario el recurso de la oración, cuanto mayores son los peligros que en el orden religioso y social amenazan a nuestra querida Patria", razón por la que aconsejaba el rezo del rosario, devoción que era "la más popular y la más indicada para obtener el favor divino en las públicas

(93) "Exhortación pastoral entre un proyecto de Constitución. Trabajemos y oremos". Véase la nota 80.

(94) 11 de septiembre de 1931, "Exhortación Pastoral. Recemos el Santo Rosario", BGE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de septiembre de 1931, núm. 671, págs. 685-691. En un suelto publicado sin firma en el siguiente número del boletín cotosano, bajo el epígrafe de "Variedades" y con el título de "A grandes males grandes remedios", volvería a tratarse de la práctica piadosa del rezo del rosario en familia, la cual se recomendaba "ante la situación de acoso a la religión en España" (BGE de Tarazona y Tudela, año 69, 30 de septiembre de 1931, núm. 692, págs. 743-744). Este suelto también se publicaría en el boletín eclesiástico de Málaga (año 64, 15 de octubre de 1931, núm. 11, págs. 408-409).

calamidades" y, de ahí, que fuera especialmente recomendable "en las necesidades presentes" por lo que los sacerdotes debían inculcar a los fieles tal recomendación y, al efecto, anunciarían la oración que señalaba, diciendo que era "por las presentes necesidades de la Iglesia y de España", práctica que recomendaba fuera continuada "mientras perduren las circunstancias que la motivan".⁽⁹⁵⁾

El Dr. Antonio SENSO LAZARO, obispo de Astorga, comenzaba su circular relativa al rosario recordando cómo su rezo durante el mes de octubre había sido insistentemente recomendado por León XIII, dado que en el principio de su pontificado "la Iglesia de Jesucristo era encarnizadamente combatida por enemigos de todas clases, y la sociedad se agitaba y se revolvía como las olas encrespadas de embravecido mar", razón por la que el papa entendía que tal rezo era el medio adecuado "para alcanzar de Dios... la victoria de la Iglesia sobre todos sus enemigos" ya que, con esta práctica se había obtenido el triunfo de Lepanto o el del rey de Hungría, Carlos VI, sobre los turcos.

Si el preámbulo del Dr. SENSO induce a pensar que su escrito puede inscribirse en el de aquellos otros miembros de la jerarquía que venían utilizando la terminología de "buenos" y "malos", "amigos" y "enemigos" para referirse a los que, en aquella situación, ayudaban o atacaban a la Iglesia, estas posibles connotaciones son desmentidas por su misma pluma cuando al aconsejar, a renglón seguido, esta práctica religiosa con referencia a los momentos que vivía España, aludirá con esperanzada y amistosas palabras a los gobernantes y a los gobernados (de los que llegaba incluso a predicar, haciendo caso omiso de las circunstancias que, no obstante, tenía bien presentes, la docilidad):

(95) 14 de septiembre de 1931, "Cultos especiales en el mes de octubre", BDE de Urgel, año 76, 15 de septiembre de 1931, núm. 18, pág. 309.

"Circunstancias gravísimas de todos conocidas aconsejan en este año se intente con premura intensificar la práctica de esta devoción tan profundamente arraigada en el espíritu cristiano del pueblo español y tan útil y provechosa para la causa de la fe católica y añadir otras piadosas preces para atraer sobre España las divinas misericordias.

«Por tanto, con el fin de obtener de Dios... el remedio de los males presentes que padecemos, y que nos libre de los futuros que nos amenazan, y para que el Señor conceda en las actuales difíciles circunstancias luz y acierto a los gobernantes y docilidad, paz y prosperidad a los gobernados, ordenamos y mandamos..."

Y a continuación, establecía diversos actos de culto relativos al rosario a celebrar durante el mes.⁽⁹⁶⁾

Apartándose del tema general de estas fechas el Dr. Tomás MUNIZ PABLOS suscribiría también el 14 de septiembre una circular para explicar a sus diocesanos la situación de las obras del seminario y en la que, dado el momento en que la redactaba, no faltaría la lógica alusión a la situación político-religiosa de España y, más singularmente, a su futura evolución.

Tras narrar las vicisitudes por las que había atravesado la adquisición del terreno para su emplazamiento, exponía cómo lograda esta dos consideraciones le animaban a emprender la obra cuanto antes, una de indole estratégica, otra de carácter social:

"...primera, que abierta la suscripción con carácter de urgente, como se hizo, cualquier demora podría defraudar a la opinión y llevar el desaliento a los entusiastas y aun el recelo de los más cavilosos; segunda, que avicinándose una

(96) 14 de septiembre de 1931, "Circular del Obispo", BOE de Astorga, año 79, 15 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 297-300.

crisis de trabajo en la ciudad, era un deber de caridad y de justicia en todos poner nuestro grano de arena para evitarla o remediarla."

Mas frente a estas consideraciones existían dos causas que podían retrasar el comienzo de las obras, ligada una a la situación económica y la otra al panorama político, que dibujaba con negros presagios:

"Una, que la actual depresión económica haría imposible para muchos suscriptores el cumplimiento de lo ofrecido y otra que los horizontes se presentan muy oscuros para el porvenir de la Iglesia en España, y por ende para todas sus instituciones y establecimientos ¿No parece una locura levantar ahora un edificio de tanta monta, cuando no sabemos si el futuro Estado, el que resulte después de la revolución en que nos agitamos, nos dejara, no ya poseer, sino aun siquiera vivir?."

Sin embargo, frente a estas razones -que tan mal hablaban de la posible actuación del nuevo régimen- se alzaba, para él, la fe cristiana en un futuro mejor, motivo por el que, pese a ellas y explicando así a los fieles el motivo de su determinación, decidía la continuación de las obras.⁽⁹⁷⁾

También referida al mes del rosario sería la pastoral del Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA, obispo de Zamora, en la que, al cantar extensamente las excelencias de esta devoción y aludir al éxito de las celebraciones litúrgicas del mes de agosto, no dejaría de recordar los incendios y profanaciones de mayo para resaltar que si en todo momento era preciso orar "en estos de lucha, de prueba, de aflicción y persecución de la Iglesia debemos orar por singular manera" ya que "los momentos actuales, preñados de zozobras y de temores, nos brindan ocasión oportuna para multiplicar

(97) 14 de septiembre de 1931, "Circular acerca de las obras del nuevo Seminario", BGE de Pamplona, año 70, 15 de septiembre de 1931, núm. 1717, págs. 377-380

nuestras plegarias y buscar los auxilios que necesitamos..."⁽⁹⁸⁾

El obispo de Tuy, Dr. Antonio GARCÍA y GARCÍA, que, como hemos visto, ya había tratado ampliamente del proyecto de constitución y de la actuación a seguir por los católicos ante él,⁽⁹⁹⁾ a mediados de octubre se limitaría a recordar a través de su canciller-secretario, lo dispuesto en años anteriores sobre los cultos del mes de octubre y a recomendar que dichos cultos se unieran a "las Rogativas imperadas por la Iglesia y por la Patria, para que revistan este carácter, y así hacer violencia dulcísima al Corazón maternal de la Santísima Virgen y que se apiade de España y la mire con ojos de misericordia, a pesar de tantos pecados como se cometen con escándalo y ruina gravísima de las almas", destacando cómo cada año era más oportuna la celebración de la fiesta de Cristo Rey, "instituida principalmente contra el laicismo cada día más imperante y amenazador en España", y advirtiendo "que donde haya fundada esperanza de que asistirán los que ejercen su autoridad, aunque sólo sea como particulares, no se deje de invitarles" ya que, añadía, "No hemos de ser nosotros los que arranquemos ni la piedra más pequeña del edificio de la religiosidad católica en nuestra amadísima Patria."⁽¹⁰⁰⁾

Muy escueto sería también el obispo de Lugo y administrador apostólico de Mondoñedo, Dr. Rafael BALANZA NAVARRO, que en su circular de 19 de septiembre recordaría

(98) 15 de septiembre de 1931, "Alocución Pastoral", BOE de Zamora, año 68, 15 de septiembre de 1931, núm. 13, págs. 193-207.

(99) Pastoral de 20 de agosto de 1931. Véase la nota 53.

(100) 18 de septiembre de 1931, "Cancillería del Obispado. Circulares sobre el mes del Santísimo Rosario y sobre la fiesta de Jesucristo Rey", BOE de Tuy, año 72, 20 de septiembre de 1931, núm. 16, págs. 408-409.

las disposiciones de años anteriores sobre el rezo del rosario estableciendo los cultos a realizar en las parroquias e instando a todos a intensificar sus oraciones dadas "las difíciles circunstancias presentes", por lo que debía pedirse la protección divina "para la Religión y la Patria, para las familias y los individuos que las componen".⁽¹⁰¹⁾

Al referirse, también eucitadamente, a la celebración de la festividad de Cristo Rey y a la realización de la colecta para la Acción Católica, el obispo de Avila, Dr. Enrique PLA y DENIEL exhortaría a los parrocos a que instruyeran a sus feligreses sobre el significado de esta fiesta "a fin de que los fieles así instruidos se conduzcan en su vida privada y publica de la manera que corresponde a los que confiesen la Realeza de Cristo Jesus"; no dejaba de advertirles, no obstante, reiterando una preocupación por las palabras pronunciadas en el templo, ya expresada en su circular de 25 de agosto sobre la futura constitución,⁽¹⁰²⁾ de que debían "en las actuales circunstancias usar de la debida prudencia para no dar pie a acusaciones de dar un carácter político o partidista a la predicación". Respecto a la indicada colecta señalaba que de su realización debía darse cuenta al obispado, "aun cuando esta por desgracia en alguna parroquia no produjese fruto alguno", lo que no era de esperar si se explicaba a los fieles lo mucho que las obras de Acción católica promovían "el reinado social de Jesucristo".⁽¹⁰³⁾

(101) 19 de septiembre de 1931, "Circular sobre el mes del Rosario", BOE de Mondoñedo, año 74, 20 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 149-150.

(102) Véase la nota 61.

(103) 22 de septiembre de 1931, "Circular sobre la fiesta de Cristo Rey, su preparación y colecta en dicho día para la Acción Católica", BOE de Avila, año 42, 30 de septiembre de 1931, núm. 11, págs. 426-427.

Mas prolijo, sin embargo, seria el Dr. PLA y DENIEL en la pastoral suscrita a los siete dias de esta circular y que probablemente -dado su contenido- también vendria motivada, como ampliación y ofrecimiento a sus diocesanos de ciertos puntos de meditación, por la cercana festividad de Cristo Rey señalada en el calendario litúrgico en el último domingo de octubre. Dicha pastoral, en la que advertía a los fieles sobre la necesidad de su unión con la Iglesia, denunciaba a todos aquellos humanistas -cuyo pensamiento calificaba como una de las numerosas blasfemias de la época- que admiraban a Cristo por sus doctrinas sobre los hombres pero que negaban su divinidad; actitud absurda, según el prelado, equiparable a la de aquellos otros que se confesaban cristianos y, sin embargo, rechazaban a la Iglesia que era, según habia querido su fundador, "Cristo viviente en la Historia" y cuya misión continuaba, pese a lo cual no faltaban "quienes quieran contraponer Cristo a su Iglesia."

Frente a tal postura queria recordar el obispo cómo, si un prelado en particular podía muy bien equivocarse, e incluso, como mortal que era, llegar a pecar, no por ello debía ser repudiada la doctrina divina, para cuya extensión y conservación habia sido dotada la Iglesia universal a través del papa, su cabeza visible, de la infalibilidad en el supremo ejercicio del magisterio en materia de fe y costumbres, ya que las enseñanzas de la religión no podían dejarse "a la voluble, falaz y apasionada interpretación particular, como quieren los protestantes." Y, sin embargo, añadía, hablando sin duda de la concreta situación que en aquellas fechas se vivia ante el inminente debate de la cuestión religiosa, se queria defender que cabia una postura distinta ante Dios y ante la Iglesia y aun se queria olvidar que Dios era el ordenador del mundo en todos los ámbitos, fuente de todo derecho y de toda autoridad:

"...en nuestros días no faltan quienes blasfemando de lo que ignoran se atreven a pretender enseñar a la Iglesia cuál es la verdadera doctrina de Cristo, y no faltan aun quienes llamándose católicos pretenden enseñar a sus Pastores y reformar la misma Iglesia.

...

«Que confusiones se están sembrando carísimos hijos nuestros, en los entendimientos!; Admirar a Cristo y renegar de su Divinidad!; Enaltecer a Cristo y escarnecer a su Iglesia!; Confesarse católico y combatir lo que llaman clericalismo! ¿Y qué es el clericalismo? ¿La pretensión de un gobierno civil teocrático? ¿Y quien pretende tal forma de gobierno? ¿No respeta la Iglesia que cada nación, cada pueblo se de la forma de gobierno civil que crea mas conveniente? ¿No predica siempre el acatamiento a los poderes constituidos? ¿No es fiel guardadora de la sentencia evangélica. "Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios"? ¿Ah! esta sentencia se repite aun por los adversarios de la Iglesia no pocas veces para que no se niegue al Cesar lo suyo. Muy bien esta, con tal que sea verdaderamente suyo y no se trate de un cesarismo tiránico personal o democrático. Pero ¿no hemos de dar también a Dios lo que es de Dios? ¿Y no se lo han de reconocer no solo los individuos, sino también las familias, las sociedades, los pueblos y los mismos Estados, cuando Dios no solo es Creador y Juez de nuestras almas, sino ordenador supremo tanto del universo físico como del mundo moral, autor de la familia como de la sociedad civil necesarias naturalmente al hombre para el conseguimiento de sus fines. fuente última de todo derecho y de toda autoridad como unico Ser que puede imponerse al fuero interno y sagrado de la conciencia humana, sin la cual puede concebirse la violenta y externa coacción como en los brutos, pero no el nobie, consciente libre meritorio cumplimiento del deber propio del hombre como ser racional?"

Esta era una de las cuestiones esenciales que todo Estado debia tener en cuenta: Dios era el fin supremo y la causa primera del derecho y de toda autoridad existente. La otra cuestión se referia al hombre: el progreso y las justas

conquistas sociales no podia confundirse con el proposito de diseñar una nueva sociedad que no solo pretendiera anclar a los hombres exclusivamente en la tierra sino que introdujera en su convivencia unos principios de todo punto inadmisibles para la moral catolica. principios que en determinados aspectos, como el del reconocimiento del divorcio, al que expresamente se referia, venian precisamente recogidos en el proyecto de constitution, aunque el prelado no lo mencionara explicitamente.

"Ensalcese el trabajo; procurese que sea dignamente retribuido; estimulese la elevacion moral y material del pueblo; pero no se nieguen ni se olviden nuestros eternos destinos; no se aboguen los deseos y fundadas esperanzas de inmortalidad, que seria tanto como desconocer la diferencia esencial entre el hombre y el bruto. No debe confundirse el laicismo con la civilidad, ni la impiedad con la cultura, ni la honrada y responsable libertad con la desenrenada licencia en las costumbres. Y sin embargo en nuestros dias vemos no solo la flaqueza de la carne que ha existido en todas las epocas, sino la pretension de elevar a teorias cientificas las liviandades del amor libre, del divorcio destructor de la familia y de la recta educacion de los hijos, y aun las aberraciones mas ignominiosas contra la humana naturaleza y la propagacion de la especie humana."

Tales "liviandades" en pro de unas nuevas reglas de conducta condenadas por la iglesia se difundian de multiples formas, pero singularmente por medio de la imprenta, de cuyas obras contrarias a la doctrina, a la jerarquia o a la moral catolicas debian abstenerse totalmente los fieles en virtud de la prohibicion decretada por el derecho canonico.¹¹⁰⁴

(104) No dejaba el prelado de recordar expresamente que contenidos entraban en la prohibicion de la iglesia:

"Por la propaganda oral, por el libro, el folleto y el periodico se esparcen doctrinas contrarias a la fe, a la religion y a la moral. Debeis precaveros contra ellas si no apostatais de vuestra condicion de cristianos y catolicos. Debeis recordar que por las

Ello no implicaba, no obstante, que los católicos no pudieran tener una mentalidad abierta o que su unión con la Iglesia implicara el atarse a una institución anquilosada. Pese a ser considerados, como continuarían siéndolo por muchos años, menores de edad en cuanto a lo que podían o no leer, un amplio margen les quedaba, según el obispo, para discernir y pronunciarse en el entramado social, singularmente en lo que atañía a la opinión entre los distintos regímenes políticos. No en vano, añadía el Dr. PLA y DENIEL en una curiosa analogía, la Iglesia, como su mismo fundador, permanecía siempre joven, sin que su obra pudiera finalizar nunca:

"La fidelidad a la Iglesia no es la estrechez de espíritu inadaptable a los cambios de los tiempos. La religión y la Iglesia dejan ancho campo a las disputas de los hombres. Ha convivido y convive con todos los regímenes. Sabe que hay algo eterno e inmutable en el cuerpo social y algo variable y mudable. Por ello no se fosiliza jamás. Cristo no quiso vivir en su vida humana más que la edad de la juventud: y la Iglesia, contra lo que blasfeman sus enemigos, es perennemente joven y fecunda.

leyes de la Iglesia contenidas en el Código de Derecho Canónico están prohibidos por el mismo derecho, sin necesidad de ninguna prohibición nominal, los libros y periódicos que ex profeso y por tendencia combaten la religión o las buenas costumbres, o impugnan o ridiculizan alguno de los dogmas católicos, o propugnan errores condenados por la Sta. Sede, o van contra el culto divino, o procuran destruir la disciplina eclesiástica, o ex profeso y tendenciosamente lanzan oprobios contra la jerarquía eclesiástica o contra el estado clerical o religioso, o defienden la licitud del duelo, del suicidio o del divorcio, o pretenden que no son perniciosas sino útiles a la Iglesia y a la sociedad civil las sectas masónicas, o sociedades del mismo género, o finalmente tratan, narran o enseñan ex profeso cosas obscenas."

Sobre la actitud de la jerarquía ante la prensa véase lo indicado en la nota 3 del capítulo "La Iglesia ante la República".

Presencia apostasias individuales, aun a veces colectivas; pero su divino proselitismo no se extingue jamas.

Al tratar del mes del rosario, el Dr. D. Agustín PARRADO GARCÍA, obispo de Palencia, señalaba que si bien habia que celebrarlo todos los años con piedad, en este se unia a la conmemoracion del Concilio de Eieso "la necesidad gravisima y urgentisima en que ahora nos hallamos los catolicos en España." Necesidad que pasaba a explicitar comentando detalladamente el proyecto de constitution y todos los principios que en el eran contrarios a la Iglesia católica: ateismo del Estado, menosprecio de las ordenes religiosas y de la familia y monopolio docente oficial y laico.

"Porque sabeis todos que en estos dias cabalmente se está discutiendo una nueva Constitution para nuestro querido pueblo, y que la discusion hallase entablada sobre la base de un proyecto que a todos nos tiene atemorizados, pues si prevaleciera en las Cortes tal como ha sido elaborado por la comision parlamentaria dentro de poco se nos cifraria, como norma de derecho publico, una ley fundamental en no pocos de sus articulos radicalmente sectaria, segun irase reciente de un Ministro de la Republica.

«En este proyecto, categoricamente se afirma que no existe religion del Estado, proclamandose con tan rotundo precepto constitucional el ateismo oficial del pueblo espanol; con menosprecio palmario de la religion, casi nunca en España, se rompen toda suerte de relaciones entre la Iglesia y el Estado, menos la de constituirse este en perseguidor de aquella, [sic] como si buscase el aniquilamiento espiritual y material de nuestro catolicismo; sin rebozo y tras de la pomposa declaracion de que "todos los espanoles son

(105) 29 de septiembre de 1931, "Exhortacion Pastoral sobre la necesidad de sentir con la Iglesia". BOE de Avila, año 42, 30 de septiembre de 1931, num. 11, pags. 417-425.

iguales ante la ley", se establece el más odioso régimen de excepción para los beneméritos ciudadanos que de por vida se consagran a servir a Dios y al prójimo por Dios; como si por burla se dijera que "la familia está bajo la salvaguarda especial del Estado", brutalmente se ataca a la dignidad, unidad y estabilidad de la familia con la negación del vínculo sagrado, la implantación del divorcio, sin necesidad de justificación por parte de la mujer, y la igualdad de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos; y en fin, en él se completa el plan sectario de persecución contra la Iglesia y la familia, a la vez, con el establecimiento de la Escuela única, obligatoria y laica, por la que se anula el derecho de la Iglesia y de los padres a formar el alma de sus hijos, y se instaura un monopolio docente enderezado a la total des cristianización de las futuras generaciones.

«Hubarrones son estos que ponen temblor en el ánimo y que nos apremian a acudir al Altísimo para que del cielo venga el aire que disipe la tempestad y la luz y el impulso que guíe por sendas de rectitud a nuestros legisladores.»⁽¹⁰⁶⁾

También el obispo de Gerona, Dr. D. José VILA y MARTÍNEZ se referiría al tema concreto de los debates constitucionales al hablar de la devoción al rosario, resaltando la importancia de que este fuera rezado en público ya que, decía:

(106) 23 de septiembre de 1931, "Circular sobre el mes del Santo Rosario", BOE de Palencia, año 81, 1 de octubre de 1931, núm. 21, págs. 617-620. Este mismo boletín incluiría un suelto sin fecha ni firma con el título "May que volver a Jesucristo", en él se decía que en el mundo existían dos corrientes contrapuestas: la cristiana y la anticristiana, o del materialismo, y teniendo la primera una "virtualidad" mayor para regirlo y gobernarlo, no se explicaba cómo, al menos aparentemente, triunfaba la segunda ni "por qué, en nuestra España, cristiana, son posibles hoy y ocurren cosas que llenan el alma de dolor", ello era porque muchos cristianos se habían olvidado de su fe reduciéndola a una repetición de actos exteriores pero sin vivirla y por ello "son muy posibles, y aun reales, en España, muchas cosas que no debieran serlo; porque son malas y están en pugna abierta con el espíritu cristiano"; por ello y para hacer "que España vuelva a pensar, sentir y obrar en cristiano" era necesario vivir de verdad la doctrina evangélica y difundirla (Ibid. págs. 639-640).

"En estos días que se está discutiendo un proyecto de Constitución, para dar al país su ley fundamental, urge en gran manera nuestra fervorosa oración a fin de que Dios ilumine a los legisladores y para que la nueva Ley constitucional del Estado español respete los derechos y fueros de la Santa Iglesia y Religión Católica y no sea ofensiva al común sentir y a la conciencia cristiana de la mayoría de los ciudadanos españoles."

La exhortación del Dr. VILA concluía con estas significativas frases sobre el momento que, a su juicio, vivía la Iglesia en España:

"¡Virgen gloriosa y bendita! en esto conoceremos que nos amas y recibes el obsequio de nuestra devoción; que no se gocen sobre nosotros nuestros enemigos. Nosotros te alabaremos y serviremos; tu nos recibirás y no darás alegría a los enemigos sobre nosotros." (107)

Al referirse al mismo tema que durante este mes trataban sus hermanos en el episcopado, el Dr. Fidel GARCÍA MARTÍNEZ, obispo de Calahorra, destacaba cómo era necesario en aquellos momentos elevar "apremiantes y multiplicadas oraciones", ya que "las circunstancias públicas y privadas del mundo, y especialmente de nuestra patria, son para todos de graves peligros y honda preocupación," toda vez que, aclaraba:

"Nos hallamos en uno de esos momentos de nuestra historia, en que los oscurecimientos y desvarios de las inteligencias, las pasiones desatadas en un

(107) 24 de septiembre de 1931, "El Rosario de pública supplicación o rogativa", 606 de Gerona, año 75, 26 de septiembre de 1931, núm. 12, págs., 395-399. En este mismo boletín se publicaba la circular del Dr. VILA comunicando que a él se unía, como separata, el mensaje de la provincia eclesiástica tarraconense a las Cortes constituyentes, prefiriendo así el obispo, a diferencia del cardenal VIDAL, tratar en forma independiente la presentación de dicho mensaje a los diocesanos y su exhortación al rezo del rosario, aunque instándoles en ambos escritos a orar por la nueva constitución. Véase sobre la circular de VIDAL las notas 42 y 89.

primitivismo salvaje, los bajos fondos del individuo y de la sociedad saliendo a la superficie en explosiones de rebeidia con nombre de libertad, de concupiscencias y de odios bajo capa de justicia, de sectarismos antirreligiosos disrazados de vacuo intelectualismo y de falsa modernidad, parecen poner en peligro los mas solidos y mas altos valores de la civilizacion cristiana."

Esta situacion, no obstante, no era una novedad para la Iglesia ya que por trances similares habia pasado a lo largo de su historia, ni la lucha o la persecucion eran para ella "un presagio fatal", ya que su fundador se las habia anunciado "como señal de legitimidad y herencia gloriosa". Pero si tal sucedia con la Iglesia como tal no ocurría lo mismo con cada uno de sus miembros, y, así,

"¡Cuantos, que se llamaban catolicos, no se atreven a confesar hoy el nombre de Cristo! ¡Cuantos que marchaban en pos de Este, impulsados por la corriente favorable, al cesar ese impulso, toman otros rumbos, alejandose cada vez mas de El! Y aun, ¡cuantos que figuraban como amigos le apedrean hoy y apedrean su Iglesia, confundidos entre los irreconciliables enemigos de siempre!.."

Sin embargo tambien estas derecciones habian sido previstas por la providencia aunque ello no significara que no fueran dolorosas para la Iglesia, que sentia "la caída y perdida de tantos hijos debiles o cobardes", por lo que todos los hermanos de estos debian orar "en suplica de que Dios se digne abreviar los dias de la apostasia y de las derrotas vergonzosas", en peticion de misericordia "sobre nuestras culpas, negligencias, tibiezas y omisiones pasadas, causa u origen en gran parte de los males presentes" y en ruego del auxilio que necesitaban "en la tribulacion y en la prueba", auxilio que deberia impetrarse en pro de "celo abnegado y encendido" para los sacerdotes, de "voluntad

decidida en el cumplimiento de todos los deberes de ciudadanos y de cristianos, y de piedad solida y rervorosa" para el pueblo fiel y, para todos, de espiritu de sacrificio ya que decia, con palabras que -como las que dira mas adelante- parecen traer resonancias del compendio del espiritu del actual "Opus Dei", "es el secreto de la fortaleza y, por lo mismo, del triunfo, el que hace a los heroes y a los martires". Junto a ello debia pedirse una "unidad inquebrantable" de todos los creyentes con la jerarquia, en la fe y en la disciplina "ya que esta unidad, a prueba de todas las insidias y de todos los combates, sera, como lo ha sido siempre, la prenda mas segura de nuestra victoria definitiva" y, finalmente, deberia tambien rogarse por la conversion de "los mismos enemigos".

Si de tal manera se actuaba, las pruebas y las persecuciones, lejos de dañar a la Iglesia, la purificarian y renovarían y, a efectos de la santificación personal, se lograría en poco tiempo "lo que en muchos años de paz y de bonanza", por lo que "el glorioso optimismo cristiano, que no solo espera siempre en el bien, aun en medio del mal, sino que sabe vencer el mal con el bien y aun sacar bien del mal, florecera en nuestras almas en alegrías y esperanzas inmortales, sintiendonos dichosos de haber merecido padecer algo por el nombre de Jesucristo."

A efectos del cabal cumplimiento de todas sus exhortaciones acababa estableciendo diversos actos de culto que deberian ser aplicados "aparte por las intenciones dichas, muy especialmente por nuestra Patria, en estos momentos en que se esta discutiendo en las Cortes la futura Ley fundamental de España, pidiendo a Dios que ilumine y que a nuestros legisladores en asunto de tanta importancia

para nuestro porvenir religioso y aun temporal.⁽¹⁰⁸⁾

El mayor laconismo en la alusion a la situacion de España en relacion con los actos piadosos propios del mes de octubre vendria representado por la circular del vicario capitular de Granada, Dr. Lino RODRIGO RUESCA, en la que indicaba que dadas "las circunstancias gravísimas del momento, tanto en el orden religioso como en el social por las que atraviesa nuestra querida Patria", se hacia imprescindible la oracion, razon por la que recordaba las instrucciones dadas sobre el rezo del rosario.⁽¹⁰⁹⁾

Si las palabras del arzobispo de Santiago, Dr. Zacarías MARÍNEZ NÚÑEZ, no serian mas abundantes que las del vicario capitular de Granada, si que revestirian mayor precision al referirse al concreto tema del debate constitucional, siendo, ademas, las unicas que encerrarian una expresa alusion a las posibles desavenencias que, como consecuencia del nuevo texto fundamental, podrian producirse entre el estamento civil y el eclesiastico amen de la obligada referencia al espiritu cristiano de que debia estar necesariamente imbuida la mas alta actuacion del Estado y al establecimiento de determinados actos piadosos durante el mes para pedir "por la exaltacion de nuestra Santa Madre Iglesia y por las necesidades de nuestra querida Patria", actos a cuya asistencia estimulaba mediante la concesion de indulgencias:

"Las especiales circunstancias porque atraviesa nuestra patria, precisamente en estos momentos en que esta elaborandose el Código fundamental de ella, nos obligan, amadísimos hijos, a redoblar nuestras oraciones para que el Señor no aparte

(108) 26 de septiembre de 1931, "Exhortación Pastoral", BOE de Calahorra y la Calzada, año 72, 28 de septiembre de 1931, num. 13, págs. 319-323.

(109) 27 de septiembre de 1931, "Circular", BOE de Granada, año 86, 1 de octubre de 1931, num. 3488, págs. 725-726.

sus ojos misericordiosos de nuestra amada España, y siga amparándola y protegiéndola, como la hija predilecta de su Sacratísimo Corazón.

«Y no olvidando, que la intercesión de la Virgen Santísima es todopoderosa, a Ella debemos recurrir, para que se apiade de nuestras tribulaciones y disipe las nubes tormentosas que han robado la paz de los espíritus; para que no se rompa la armonía necesaria entre las autoridades eclesiástica y civil; para que nuestras leyes sigan honradas con el respeto a los derechos de Dios, y vivificadas por la savia del Evangelio, único medio de poder exigir y merecer el acatamiento de los ciudadanos y de que nuestra patria vuelva a ser "la de los altos destinos", no por el peso de sus armas, sino por la sabiduría y prudencia de sus leyes y el espíritu cristiano de su civilización."'''»

Un interés mayor que las que acabamos de apuntar revestiría, a los efectos de este análisis, la pastoral suscrita por el Dr. Mateo COLOM y CANALS, obispo de Huesca, a finales de septiembre y en la que, al igual que sus hermanos en el episcopado, exhortaba a los fieles, de acuerdo con las enseñanzas de los pontífices y en vista de los beneficios que, según ellos, reportaba a la Iglesia, al rezo del rosario. El interés de sus palabras radicaba en la forma en que describía la manera en que la Iglesia era tratada por el gobierno, las defecciones de muchos fieles y, singularmente, su curiosa afirmación de que un régimen

republicano exigia de los ciudadanos tanto mayor altura como mayor religiosidad, una religiosidad, empero, como hemos visto en las recomendaciones de otros prelados sobre las lecturas, que no parecia ir aneja con esa mayor cultura, maxime cuando, como veremos, el Dr. COLOM mas parecia fundamentaria en las premisas del sometimiento a una autoridad divina que castiga que en una solida formacion sustentadora de la fe, unica forma, entendemos, de conciliar esa religiosidad que pedia con la cultura a que aludia y con el reconocimiento de los derechos y de la mayoria de edad de los ciudadanos propia de un regimen democratico:

"El horizonte se presenta bosco. La Iglesia se ve perseguida en todo el mundo; las gentes se alejan de Dios; y se ciernen, amenazadoras, espantosas hecatombes sociales.

«Ni estan tan lejanas esas amenazas, que nos puedan tener con pequeño cuidado. ¿No veis que huracán de laicismo se ha desencadenado en nuestra Patria? Se oprime a la Iglesia; se le niega la libertad y se trata de aherrarla haciendole imposible el cumplimiento de su mision divina, que no es otra que la de aleccionar a las gentes en las enseñanzas de Jesucristo Nuestro Señor, promover la practica de las virtudes y combatir todos los vicios.

«¿Hemos de recordar los incendios de casas de oracion y de piedad cristiana; los templos arrasados, las imagenes profanadas, los crucifijos mandados retirar de las escuelas, las amenazas de enseñanza laica obligatoria para descristianizar a la niñez?

«¿Sera preciso traer a la memoria el desvio de la Iglesia por parte de muchos que se llaman cristianos? ¡Ay y cuantos hijos nuestros, tan queridos de nuestro corazon, como redimidos con la sangre divina de Nuestro Redentor, se alejan de las practicas religiosas, insultan a los sacerdotes, aborrecen a la madre piadosisima, la Iglesia catolica, que los regenero con las aguas del bautismo incorporandolos a Jesucristo, los acompaño en los actos mas solemnes de la vida, en la primera comunión, en el santo matrimonio y en

las horas de amargura, cuando la desgracia o la muerte se introdujeron en sus moradas!

«¡Pobres hijos nuestros los que van, decididos, por los caminos de perdición! Piensan que la República, que es una forma de Gobierno, como otra cualquiera, que exige mayor cultura y mas profunda religiosidad en los ciudadanos, los exime de los deberes para con Dios y de la necesidad de mirar por su perfeccionamiento y por la salvacion de sus almas.

«No os engañeis. Dios es el mismo ahora que hace unos meses y que hace una eternidad. Vuestra dependencia del Ser Supremo no se ha roto con el cambio de regimen. Los mismos deberes teneis hoy para con Dios, para con la Iglesia y para con vosotros mismos, que teniais antes. De la accion de Dios nadie se escapa; y todos, queramos o no, tenemos que caer en sus manos. Y no olvidéis que es horrendo caer en las manos del Dios a quien se ha despreciado y cuyos preceptos sistemáticamente se han traspasado.»

Mas, junto a estos argumentos, esencialmente basados en el cumplimiento de unos preceptos religiosos en el seno del nuevo regimen, so pena de merecer un divino juicio negativo, no se privaria al Dr. COLOM para mejor convencer a los fieles que la republica no implicaba el desvio de la fe, de esgrimir otros mas terrenales: el arianzamiento, orden y prosperidad del nuevo regimen dependia, precisamente, de la capacidad de los ciudadanos para ser buenos creyentes, y unica forma, segun el de que el hombre se atemperara al cumplimiento del deber, so pena, si asi no lo hacia, de que la sociedad sufriendo terribles males:

“¿Como vais a ser buenos ciudadanos y republicanos fieles si comenzais por ser cristianos malos...? La maldad humana es fuente de desorden. Cuando las colectividades vuelven la espalda a Dios y echan de si los deberes para fijarse unica y exclusivamente en los derechos, las calamidades, las zozobras, las intranquilidades, los odios, las luchas iraticidas, las miserias asoman la cabeza por todas partes.

«No teneis mas que mirar en derredor nuestro: ¿qué veis? La disolución mas espantosa; ambiciones sin freno, odios sin medida, intranquilidades, quebrantos, ansias de paz, desordenes, miserias, amenazas de terribles hambres.»

Por todas estas razones ese año, mas que nunca, era necesario rezar el rosario, un rezo que el Dr. COLOM enmarcaba en una actitud de respeto hacia el gobierno y, siguiendo el estilo de toda la pastoral, en el supremo interés de la no derrección de las masas catolicas en la nueva situación politica y, así, mediante el, habia que pedir a Maria "que vele por España, que de luces y aciertos a nuestros gobernantes; que mantenga dentro del amor a la Iglesia a los hijos que, ciegos, la abandonan; que conjure las desgracias que nos amenazan, y nos libre de los gravísimos peligros a que estamos abocados". El rezo de la oración debia realizarse en el templo (para fomentar la asistencia concedia el obispo determinados dias de indulgencia), pidiendo "por las necesidades de la Iglesia y del Estado", o bien en familia, institucion sobre la que, en parangon con la descripción de la divinidad, basada en el juicio supremo, que antes habia realizado, destacaba el tradicional concepto de la superioridad paterna ("¿Y qué grande y cuán hermoso es ver al padre, rodeado de su mujer, y de sus hijos, rezar en el hogar el santo Rosario! Nunca tiene el padre ni más autoridad, ni más grandeza, ni majestad mayor").

Finalizaba el Dr. COLOM su pastoral reiterando la necesidad de efectuar la practica que recomendaba, pues "los peligros para la Iglesia, para el mundo, para la patria, para nosotros, para nuestros hijos, para todos, son enormes."

(111) s.t. "Sobre el Santo Rosario", BOE de Huesca, año 80, 1 de octubre de 1931, num. 10, pags. 479-483.

Hemos de indicar para acabar con esta referencia a las pastorales genericas en las que distintos prelados aludieran a la situacion de España antes del debate religioso en las Cortes, que fue el Dr. GOMA el que el mismo día 10 de octubre, fecha en la que, con los discursos de HURTADO y ALCALA ZAMORA se iniciaba en ellas tal debate, volvió a coger la pluma para hablar de un tema específico en el que si, a pesar de lo señalado del día, no se referia en absoluto a la nueva constitucion, si reiteraba su vision del panorama socio-religioso que se estaba viviendo.

La finalidad de su pastoral era convencer a los parrocos de la oportunidad y conveniencia de que en las diócesis de Tarazona y Tudela se iniciara en aquellas fechas la publicacion de una "Hoja parroquial", segun el acuerdo adoptado en la Semana catequística que se habia celebrado en Calatayud, idea a la que el obispo era totalmente favorable y que defendia con énfasis en su escrito, en el que comenzaba por analizar los inconvenientes que podrian argüirse en contra de tal publicacion:

"Podria parecer que en medio de la agitacion de ideas y desasosiego de espiritus en que vivimos no tendra nuestra Hoja ambiente propicio a su divulgacion; que la furiosa corriente de irreligion y laicismo que amenaza arrastrarlo todo puede engendrar prevencion contra una Hoja volandera que no se recata de llamarse "parroquial", que saldra de la parroquia y que llevara la doctrina y la vida misma de la parroquia a todos los hogares, incluso a los mas prevenidos contra las cosas de la Iglesia. ¿Podrá la Hoja, en las actuales circunstancias, soliviantar a algunos espiritus, por lo mismo que puede ser una prueba de vitalidad de nuestras iglesias y de nuestro empeño en conservar el deposito de nuestras creencias y tradiciones, hoy tan combatidas."

Esto podía, ciertamente, suceder ya que, como puntualizaba el prelado, "por mucho menos se ha excitado la fobia de gente incomprensiva y demasiado 'celosa' de ideas y cosas que les parecen nuevas y que ya han envejecido muchas veces," pero esta razón no era, desde luego, suficiente para no realizar la publicación pues tan sólo pretendía ser un "instrumento legítimo y eficaz de apostolado" y si alguien sufriera por ello escándalo no sería por culpa de la Hoja "sino de la mala disposición de quien la lea, o simplemente la 'vea'". Además a "la abundancia del mal" era preciso poner "la sobreabundancia del bien, y más cuando el mal ha levantado sus esclusas y lo invade todo, a ciencia y paciencia de quienes debiesen contenerlo", de ahí que entendiera como conveniente que se efectuara la publicación como complemento de la acción de los párrocos, dado que "la deserción de nuestras iglesias por el pueblo es cada día más general: un porcentaje muy considerable cumple todavía con la parroquia en la mayoría de nuestras feligresías; pero la profanación de los días festivos, por la falta de asistencia a la misa y por el trabajo en el campo, llega en muchas parroquias a tener el carácter de habitual y general."

La situación social, en efecto, había cambiado mucho, los creyentes ya no iban al templo, ni tenían, como antaño, libros religiosos, de lo que se seguía "una ignorancia espantosa en las cosas de nuestra religión". Si a ello se añadía

"... la profusión de libros, periódicos, hojas volanderas, virus, en fin, de malas doctrinas que atosigan su pensamiento y basura de obscenidades que corrompen su corazón, tendréis la explicación de la decadencia de la vida religiosa en nuestras comarcas. Acaba de agravar el mal la propaganda, tenaz y concienzuda, que, de palabra y por escrito, se hace hasta en los medios más humildes y entre gente del campo, de las novísimas doctrinas de reivindicaciones sociales, todas ellas hostiles, o a lo menos totalmente desgajadas de nuestra ideología cristiana tradicional."

Por ello, y porque "al tiempo hay que darle lo suyo", la Hoja parroquial iba a responder a las necesidades del momento, ya que "se van rompiendo los moldes viejos en toos los órdenes: es una exigencia del empuje de las ideas nuevas, que, por incomprensión de quienes las sustentan, entran en pugna con nuestra vieja ideología católica...", cuyos moldes no podían romperse pero sí que había de adaptarse "a las nuevas luchas con procedimientos nuevos de combate y de conquista". Por ello, y frente al pesimismo manifestado por algunos párrocos -que, en una información previa habían llegado a decir que entre su feligresía tan solo podrían repartir un ejemplar de la Hoja- el Dr. GOMA insistía en el entusiasmo y optimismo con que debían acoger el nuevo proyecto dada la experiencia que conocía de otras diócesis y ya que, al fin y al cabo, si en los villorrios se leían varios periódicos "tal vez malos", mejor resultado se obtendría con la Hoja parroquial, más económica que aquellos y que debían contar con sus propagandistas pues no debían ser "más sagaces los hijos de las tinieblas que los de la luz". (112)

(112) 10 de octubre de 1931, "Exhortación Pastoral, Nuestra 'Hoja parroquial diocesana de Tarazona y Tudela'", BGE de Tarazona y Tudela, año 69, 16 de octubre de 1931, núm. 693, págs. 751-759. Con un propósito más concreto e incluso más beligerante también el boletín eclesiástico de Oviedo había dado por aquellas fechas la noticia de la publicación de diferentes "hojas" que, con el título de "Temas de actualidad" editaba el "Comité de Propaganda" de la diócesis, hojas de las que, según se indicaba, se habían repartido más de doscientos mil ejemplares "para instruir a los católicos acerca de algunas cuestiones fundamentales y contrarrestar de alguna manera la violenta y calumniosa campaña que contra la Iglesia de Cristo se ha desencadenado en estos días"; los temas tratados hasta la fecha con dicha finalidad eran los siguientes: "Lo que piensan los católicos acerca de la libertad de cultos"; "El presupuesto del clero"; "La libertad de conciencias"; "¿Es verdad que la Iglesia no ha hecho nada por los pobres?"; "El Papa"; "Religión sin intermediarios"; "Legalidad de las Ordenes religiosas en España"; "El poder del Papa"; "La Iglesia y las Reformas sociales"; "La Iglesia (I)"; "¿Es la Iglesia Católica enemiga del progreso?"; "La Iglesia (II)"; "Jesucristo y el obrero"; "El Credo y el Decálogo"; "El Estado según la doctrina católica"; "Relaciones entre la Iglesia y el Estado"; "¿Clericalismo?"; "¿Y la preponderancia del clero?" (s.f. "Temas de actualidad", BGE de Oviedo,

Solo nos resta señalar, por último y para finalizar este epígrafe, que también el día 10 de octubre el vicario capitular de Toledo, Dr. ROCHA PIZARRO, suscribió unas breves líneas en las que ordenaba que los sacerdotes dijeran determinadas oraciones en las misas tanto para implorar el fin de la "persistente sequía" como para pedir por España, ya que, "si es siempre necesario acudir al Cielo con suplicas instantes para que nuestra nación sea guiada por caminos de paz y prosperidad, así en el orden espiritual como en el material, lo es mucho más aun en las circunstancias actuales en que hay planteados tantos y tan graves problemas que afectan al porvenir de la Iglesia y de nuestra Patria".⁽¹¹²⁾

año 67, 1 de octubre de 1931, num. 19, págs. 286-287). Por los datos de que disponemos según los boletines eclesásticos consultados la diócesis de Oviedo fue la única que realizó esta edición de hojas monográficas tratando las cuestiones objeto de mayor debate socio-religioso en la opinión de la época.

Estas iniciativas, no obstante, serían pronto controladas por el gobierno, a juzgar por la noticia de la suspensión de la "Hoja Parroquial" a mediados de agosto de 1932, "por orden gubernativa", que dió el boletín de Irujo y Tudela (año 70, 15 de octubre de 1932, num. 717, págs. 684-685.)

(113) 10 de octubre de 1931, "Colectas imperadas", BQE de Toledo, año 67, 16 de octubre de 1931, num. 19, pág. 351.

7. La respuesta social.

7.1. Los fieles católicos y el clero.

Las voces que con carácter previo a la recepción de las instrucciones transmitidas por el nuncio el 10 de agosto -como serían las contenidas en el documento colectivo de 25 de julio-, o con posterioridad a ellas -como las que aludían a las acciones concretas e emprender que figuraban en las pastorales de los obispos de Tuy, Tarazona, Salamanca y Tortosa, analizadas en el epígrafe quinto de este capítulo-, no dejarían de producir sus rápidos frutos: el clero y, más numerosamente, los fieles, asumirían prontamente su papel de defensores, en el terreno de la contienda civil, de los intereses de la fe que profesaban, según les había instado la jerarquía.

Con independencia del mensaje elevado a las Cortes el diez de agosto por el clero secular de la diócesis de Palencia y que, por tratar exclusivamente de la defensa de las órdenes y congregaciones religiosas, reproducimos en el apéndice que, como hemos indicado, dedicamos a esta materia, las primeras noticias que hemos encontrado de la mencionada actuación fueron las insertadas en "El Debate" que, a finales de agosto, daba cuenta de la visita efectuada por "una nutrida Comisión de más de quinientas personas, que representaban a las Asociaciones Católicas de Madrid", tanto al presidente del Gobierno como al del Congreso de los diputados, para hacerles entrega de un escrito de protesta por la actuación de los poderes públicos contra la Iglesia y por el proyecto de constitución, amen de referirse a cuestiones de moralidad pública y a la propia actitud del

gobierno respecto a los fieles, cuyas actividades venia asimilando a las que podrian derivarse de una ideologia monarquica. El escrito presentado acababa solicitando la retirada del proyecto constitucional. (114)

Las palabras que ponia el rotativo en boca de ALCALÁ ZAMORA como respuesta a estas peticiones no dejan de parecer, cuando menos, paradójicas, puesto que, segun el diario, habia indicado a la comision visitante que los catolicos "no debian alardear de fuerza y que el les prometia defender la Religion mejor que ellos". Mas benevola era la interpretacion que hacia el periodico de la actitud de BESTEIRO, del que decia que "amablemente se ofrecio a trasladar el escrito a la Comision encargada del proyecto constitucional."

Este mismo numero de "El Debate" reseñaba a continuacion que la Junta Central de Accion Catolica se habia dirigido por su parte al presidente de las Cortes "para pedir que en la futura Constitucion se establezca la confesion catolica del Estado español, y, por tanto, que no se tome ninguna medida contra los altos intereses de la Iglesia."

Tambien daba cuenta el periodico de que los representantes de los distintos sectores catolicos de Ciudad Real habian dirigido al presidente del Congreso un escrito

(114) Asi, el escrito pedia concretamente: "... que terminen y se anulen todas las disposiciones dictadas contra la Iglesia, desde la expulsion de los Prelados hasta el ultimo e ilegal decreto sobre bienes religiosos; que terminen las torcidas interpretaciones a la noble y santa actuacion de la Iglesia, que termine esa mentirosa interpretacion oficial que atribuye a complot monarquico cualquier actuacion, protesta o asociacion que se hace en la mas justa y legal forma ante derechos tan atropellados como los de los catolicos en cuya actuacion actual no hay nada monarquico y todo lo inspira el bien social al que debiera tender el Gobierno y el Parlamento, y que se retire como antiespañol el proyecto de Constitucion que ha sido sometido a la aprobacion de las Cortes constituyentes."

en el que pedían "un referendun que afirme la conciencia católica nacional de España."

Tras otras noticias relativas a las protestas realizadas por la prensa de Barcelona sobre el proyecto constitucional y al artículo escrito por PUIG Y CADAFALECH en defensa de las órdenes religiosas, "El Debate" acababa su reseña refiriéndose al escrito enviado por el cabildo de Sevilla al presidente del Gobierno, escrito en el que se protestaba por el proyecto de constitución pidiendo que se procurara impedir que se aprobara el artículo relativo a las relaciones entre la Iglesia y el Estado; también aludía el periódico al telegrama cursado por dicho cabildo a los diputados sevillanos, solicitándoles que impugnaran cuanto en el proyecto de constitución ofendiera a las creencias religiosas.⁽¹¹⁵⁾

Con independencia de estas noticias de prensa, hay que destacar la publicidad que los boletines diocesanos dieron a los actos concretos que, en protesta por el articulado del proyecto constitucional, realizaron distintos grupos de católicos. Como botón de muestra y por no adentrarnos en el prolijo análisis de todos los que figuran en el archivo de las Cortes bajo la rúbrica de "Mensajes a las Cortes Constituyentes", nos referiremos a aquellos que, por ser más notorios o por responder más clara y directamente a las palabras de la jerarquía, merecieron ser difundidos por los mencionados boletines.

(115) "Cabildo catedral, interpretando sentimientos pueblo sevillano que ustedes representan y que ha demostrado sus arraigadas creencias religiosas asistiendo procesión Virgen de los Reyes en número superior 30.000 espera impugnen proyecto Constitución en cuanto ofende dichas creencias," "El Debate", 26 de agosto de 1931.

Así, el boletín eclesiástico de Segovia publicaba, con fecha 31 de agosto, la noticia de la entrega a las Cortes, el día 22 del mismo mes, de mas de cuarenta mil firmas de rieleos -recogidas a instancia de la Junta de Acción Católica femenina de la diócesis, secundando la iniciativa transmitida por la Junta Central- en protesta por las disposiciones secularizadoras, las expulsiones de prelados y el anteproyecto⁽¹¹⁶⁾ de constitución.

Dichas protestas se expresaban en la larga instancia que encabezaba los volúmenes conteniendo las firmas y en la que los católicos segovianos comenzaban recordando ante las constituyentes que en el mes de junio habían instado al gobierno provisional la revisión de los decretos laicizantes y la revocación de la expulsión del primado y de los obispos de Málaga y Vitoria,⁽¹¹⁷⁾ petición que, por haber sido desoída en aquel momento, reiteraban ahora ante las Cortes.

Mayor extensión tenía el punto siguiente dedicado a enjuiciar los perfiles de la nueva constitución, que, para perdurar y ser eficaz, decían, necesario era que se ajustara "a la ley natural, a la tradición milenaria, a la historia, necesidades y modalidades de la nación." Estos requisitos no acompañaban al anteproyecto, singularmente por el contenido de sus artículos tercero, veinticuatro, veinticinco, cuarenta y dos y cuarenta y seis, en "total e inconciliable oposición con la doctrina católica, con los derechos concedidos a la Iglesia por su Fundador Jesucristo, con su libertad e independencia, con su jurisdicción propia y soberana y con las mas fundamentales enseñanzas del derecho natural, político, económico y social."

(116) Aunque el escrito hablaba reiteradamente del "anteproyecto", dados los artículos que citaba es obvio que se refería al proyecto redactado por la Comisión parlamentaria.

(117) Ver la petición citada en la nota 119 del capítulo "La Iglesia ante la República."

"El anteproyecto es ateo, laico, a toda vela, colectivista en sus audacias, perseguidor con radicalismos que nunca pudimos esperar, de la Iglesia católica en su esencia e instituciones, en su libertad y en sus Institutos religiosos, en su propiedad legítima y sagrada y en sus sacerdotes, a los que no reconoce sus derechos privativos.

"Si en sus artículos se trata de la religión es para anularla, con sectarismo no disimulado, para subordinarla al Estado, que se convertiría en tirano legal, si prosperaran el espíritu y la letra del anteproyecto."

Y para intentar refutar el contenido del mismo, cosa que, indicaban, era imposible efectuar en los límites de su escrito, pasaban a argumentar en pro de las líneas maestras que, según la doctrina católica, debían informar toda regulación de la sociedad civil, a la cual dedicaban su primer argumento: tal sociedad, señalaban, no derivaba de un contrato, ni de una convención libre, y tenía como deber principal, "por necesidad irreprimible", el dar "culto social" a Dios, toda vez que, como Estado o como nación, ello era una obligación si quería "subsistir, desenvolverse y conseguir su fin"; obligación de la que, además, derivaban una serie de bienes esenciales en el mero plano de la convivencia cívica, que -imposibles de alcanzar por la sola determinación de las leyes, incapaces de frenar por sí el egoísmo humano-, sólo podrían lograrse por medio de la religión. Dichos bienes no eran otros, para los firmantes -que comenzaban señalando los que más caros podrían ser a los representantes políticos- que "el respeto a la Autoridad, la fidelidad a la Constitución, la obediencia a las leyes civiles, la práctica de las virtudes sociales, la justicia y la caridad, la abnegación y la paciencia, la generosidad y los sacrificios por el bien general que debe prevalecer sobre el bien particular." Por ello, como las Cortes muy bien conocían, pensadores del pasado habían proclamado la necesidad de la religión para toda sociedad (religión que, para los redactores del documento, según las

citase que a continuación incluían, era indiferente que se basara en el más puro paganismo), lo que, además era singularmente aplicable al caso de España, cuya historia se había nutrido de sus creencias religiosas. Así, no podía consentirse que la constitución proclamara que no existía religión del Estado.

La segunda argumentación en contra del contenido del proyecto constitucional iba destinada a la defensa de la Iglesia, la cual era "sociedad espiritual, superior su fin al del Estado, jurídicamente perfecta e independiente, con la postestad, recibida de su divino fundador, precisa a la consecución de su fin". Por ello no podían aceptarse los artículos que desconocían esa realidad y pretendían subordinarla al Estado "como una Asociación civil cualquiera y limitan su actividad social y la expolían de sus medios propios y la niegan todo auxilio económico oficial."

Seguidamente se abordaba el tema de las órdenes religiosas, que estaban, decían, constituidas por "obreros infatigables de la cultura, de la civilización y del amor al pueblo y a la patria", y que, "en nombre de la democracia", quedaban disueltas en el "anteproyecto", decretándose la nacionalización de sus bienes. Ello sería no solo la mayor injuria al derecho canónico y de gentes, sino sello oprobioso para el parlamento que lo admitiere, tanto más cuanto que en otro artículo -el treinta y siete- se concedía que "los españoles puedan asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana."

Se proclamaba que la razón de estas medidas era la necesidad de igualar a España con el resto de Europa, mas sobre ello querían recordar que las constituciones de muchos de sus países "son más justas, respetuosas y cuerdas con la Religión y cuanto a ella atañe." Frente a tales ejemplos,

el anteproyecto de la Comision, "saltando sobre todo derecho, justicia, consideracion y conveniencia de la nacion, solo mira, a juzgar por sus articulos, al exterminio de la Religion catolica y de sus ministros, negandoles todo auxilio y proteccion, encerrandolos en sus templos, y aun dentro de ellos el respeto es sin valor, ni garantias, ya que se arroga la inspeccion y los deja a la arbitrariedad de cualquier autoridad, que puede intervenir en nombre del orden publico!". Este planteamiento era tanto mas extraño cuanto que el anteproyecto habia suirido grandes influencias de la constitucion de Weimar, de la que, no obstante, se separaba al tratar el tema de la Iglesia, contemplada en aquella en una forma que revelaba "el interes y cuidado del Estado en el punto vital de la religion."

La constitucion que se pretendia dar a Espana, "nacion profundamente catolica", caia "en la negacion de los derechos fundamentales, en los mas crudos sectarismos, hasta resultar persecutoria e inaceptable", por ello pedian que no se admitieran los articulos que tal hacian, a fin de que la legislacion fuera acorde con las creencias del pais, pues "de otro modo este no podria aceptarla y habria de repudiarla, con toda energia, sin descanso, por todos los medios legitimos, hasta conseguir la debida modificacion", dura advertencia que inmediatamente seria suavizada al recordar a las constituyentes, una vez mas, la necesidad de la doctrina catolica y sus principios en el orden civil para resolver todos los problemas de caracter social y economico que en aquellos instantes vivia Espana:

"El momento presente, con su red de huelgas, mas que economicas, revolucionarias, las violencias, que estremecen algunas regiones, los intentos anarco-sindicalistas, los acuciantes problemas economicos, de honda preocupacion, por ser fruto de sistemas enemigos de la religion y de su influencia social, dicen con luz meridiana la necesidad de la religion y de su accion bienhechora para las corporaciones, para la

sindicación, para toda institución, para al Estado, y señalan la ruta de decadencia y destrucción social, si fuese un hecho el triunfo integral de esas teorías.

«Religión y moralidad requiere la vida, la democracia española; hay que abrir cauce a todos los problemas, aun a los económicos, en la moral -que todos tienen un fondo moral- y los fracasos de la economía del siglo pasado y presente, en su pretensión de independizarse de la moral, han sido inmensos y producido la delicada situación actual.»

En base a todos los argumentos expuestos concluían los redactores demandando unas relaciones entre Iglesia y Estado basadas no solo en la armonía sino en una clara colaboración que, eso sí, habría de respetar los fines mutuos "sin pretensiones de absorción o intromisión"; petición esta de los católicos que, andando el tiempo y derrocado el régimen republicano, habría de dar lugar al llamado "nacional-catolicismo", pacíficamente aceptado por la inmensa mayoría de los creyentes, y que si representaría un sistema de entendimiento sin fricciones entre ambas potestades, no dejaría de implicar una verdadera renuncia de coordinadas básicas de esa Iglesia en libertad que proclamaría el Concilio Vaticano II a cambio de un decidido proteccionismo estatal, dando paso a una situación poco acorde para el juego de la verdad por ambas partes y contribuyendo a retardar la madurez que el pueblo español precisaba.

"Como es justo en un país de la raigambre católica de España, queremos, suplicamos y demandamos, con todos los respetos pero con toda firmeza, la unión normal de la Iglesia y el Estado, prestandose mutuo apoyo y defensa; el Estado, rindiendo a Dios el culto social en nombre del pueblo católico que representa y secundando con los medios a su alcance a la Iglesia en la consecución de su fin espiritual; y ésta protegiendo y defendiendo al Estado -como hasta el presente ha hecho- y caldeando a los ciudadanos en el amor a la patria, que tiene su principio, la raíz de su vitalidad, en el amor de Dios.

«Soberanos el poder eclesiástico y civil, cada uno en su esfera propia, convivan en concordia, respeten ambos los límites que les asignan sus fines respectivos, sin pretensiones de absorción o intromisión en la zona que no es de su incumbencia. Busque el Estado un acuerdo justo y benéfico con la Iglesia, por medio de un Concordato, acomodado a las actuales circunstancias, al igual que lo vienen realizando, con plausible empeño diplomático, los demás países de Europa.»

Este y no otro era el camino para el terrenal fin que los autores del escrito, siguiendo las argumentaciones que ya hemos visto en pluma de muchos prelados, proponían como señuelo a las constituyentes: solo con tal actuación se lograría "el engrandecimiento de la patria", engrandecimiento que entendían, además, basado no solo en la concordia social sino también en los conservadores y nacionalistas tópicos de "las tradiciones y virtudes raciales", como fundamento de la pasada hegemonía de España, pensamiento introductorio de la idea de raza, de posteriores y claras resonancias que, que recordemos, no había sido esgrimido como clave histórica por ningún prelado hasta el momento, si bien no dejaría de ser va esbozado por el obispo GOMA, tan proclive a estos planteamientos, en sus pastorales sobre el divorcio y matrimonio civil a las que en el capítulo correspondiente aludiremos.

"Catolicismo y patriotismo son inseparables en nuestra patria; no tratemos, en esta hora, de tan singular responsabilidad, de disgregarlos, ni siquiera de espaciarnos, antes procuremos una más íntima unión, para bien de la Iglesia, para la salvación de la nación y para la consolidación del régimen democrático.".....

(118) 19 de agosto de 1931. BOE de Segovia, año 76, 31 de agosto de 1931, núm. 76, págs. 364-371. Al ser revelador del pensamiento de los señores que ejercían para una gran masa de católicos funciones de liderazgo y contener la asunción que hacían del sentir y orientaciones de la jerarquía, incluimos este documento en el apéndice núm. e.

Si en el caso de Segovia la iniciativa a que acabamos de aludir tenía su entronque directo con una idea lanzada por la Junta Central de Acción Católica, sin conexión con directriz pública alguna dada por el obispo de la diócesis, no respondería a tal planteamiento el documento remitido a sus diputados por los católicos de Tuy, cuyo obispo, el Dr. GARCÍA y GARCÍA, había figurado, según hemos visto, entre los primeros en dirigirse a sus fieles para, interpretando las instrucciones dadas por el Vaticano, instarles a actuaciones concretas ante las Cortes.

Según la reseña publicada por el boletín eclesiástico de la mencionada diócesis, el escrito, fechado el 1 de septiembre, había sido remitido "al discutirse en el Parlamento los artículos del Proyecto de Constitución referentes a la Iglesia."⁽¹¹⁹⁾ Firmado por quienes decían actuar "en nombre propio e interpretando el sentir de todos o casi todos los electores que en este distrito votaron su candidatura para las Cortes Constituyentes, católicos de abolengo y de corazón", comenzaba expresando su alarma "ante el irreligioso Proyecto de Constitución elaborado por la Comisión Parlamentaria", por lo que pedían a sus representantes políticos que no lo votaran "en todo aquello que directa o indirectamente se oponga a los principios fundamentales de nuestra Santa Religión."

Declaraban los firmantes que habían acatado sinceramente el nuevo régimen; no protestaban, pues, contra la República --"ni podíamos protestar como católicos", puntualizaban--, sino "contra las tendencias sectarias" que unos cuantos querían imprimirle, conlundiendo "la forma republicana con el sectarismo impío"; "unos cuantos" demasiado poderosos, no obstante, y que claramente veían

(119) Con independencia del dato de la fecha en que el documento aparece suscrito, hay que recordar que la discusión del articulado del proyecto que más directamente afectaba a la Iglesia no comenzaría hasta el ocho de octubre,

asociados a una determinada tendencia política al afirmar seguidamente que, frente a la confusión expresada, ellos deseaban que la República fuera "un régimen constructor, equitativo, digno y beneficioso para todos los españoles en general, y no un privilegio político o un monopolio de partido en favor de unos pocos, perjudicial, injusto y opresor para la mayoría de los ciudadanos", frases con las que no dejaban de revelar su mala interpretación o supuesta ignorancia del juego y respaldos democráticos, producto directo del resultado de las urnas.

Tal deseo les llevaba a pedir directamente, "sin entrar en detalles sobre el extenso articulado" y refiriéndose "al espíritu abiertamente irreligioso del Proyecto", que fueran totalmente rechazados sus artículos tercero y veinticuatro, dado que el primer artículo citado establecía

"un absoluto laicismo del Estado, con notoria injusticia y ausencia de sentido jurídico, puesto que si la mayoría de los españoles son católicos, católicos deben ser las leyes españolas en su espíritu y tendencias generales, aunque los gobernantes no sean creyentes."

Tal afirmación era obvia para los redactores del documento, toda vez que, decían -citiéndose en sus consideraciones a planteamientos de estricta doctrina política muy ajenos a los de índole filosófico-religiosa propios del catolicismo de la época, que, como en el capítulo anterior tuvimos ocasión de ver en pluma del Dr. GOMA, basaban todo concepto de soberanía en la idea de un Dios supremo- "en una República democrática... la voluntad del pueblo es soberana, y no se concibe que una minoría se imponga a la mayoría", frase en la que, por otra parte, volvían a reiterar su idea de "minorías" y "mayorías" tan ajena a las reglas de las elecciones democráticas.

El artículo veinticuatro del proyecto, por su parte, pretendía igualar a la religión católica con cualquier otra confesión religiosa, sometiénola, además, como una simple asociación, a las leyes generales del Estado; tal regulación suponía, para los redactores del escrito, no solo un desconocimiento de las "tradiciones y las glorias" de España sino el olvido de lo que esta, como nación, le debía al catolicismo.

Para mayor agravio, el párrafo segundo de ese mismo artículo determinaba que el Estado se desentendiera de la obligación de sostener el culto y clero católicos, lo que equivalía a "un verdadero despojo", toda vez que "el capítulo de obligaciones eclesásticas es un caso de restitución, no tan generosa como debía ser, por los bienes arrebatados a la Iglesia en la desamortización." (120)

Y, por último, su tercer párrafo pretendía establecer una "ley de excepción" contra los religiosos al determinar "la disolución de todas las ordenes y Congregaciones católicas (de otras confesiones no las hay), y la nacionalización de sus bienes, sin determinar siquiera si esto se hará con o sin indemnización." Deber de los católicos de Galicia era protestar de tal previsión y pedir a sus representantes políticos que se opusieran a ella, ya que, para mayor agravio, dicha regulación implicaba una

(120) Si bien el análisis del problema de la supresión del presupuesto del culto y clero excede del límite de esta tesis, tal como hemos dejado apuntado, queremos señalar aquí que el tema de la deuda contraída por el Estado con la Iglesia a causa de la desamortización, fue reiteradamente expuesto por la jerarquía en las pastorales publicadas tratando de esta cuestión, ya fuera con el objeto de protestar oficialmente por tal supresión, concienciar a los fieles sobre la ayuda económica que, por ella, debían de comenzar a prestar a la Iglesia u organizar en las distintas diócesis la estructura necesaria para hacer frente a la nueva situación financiera que se anunciaba. Como ejemplo de lo que antecede, y según ya se ha indicado, incluimos en apéndice complementario los escritos más representativos de la jerarquía abordando este tema que, preciso es resaltarlo, fue uno de los más profícuaente tratados en el periodo que examinamos.

manifiesta oposición a la contenida en el artículo segundo del proyecto ("todos los españoles son iguales ante la ley"), en el artículo treinta y uno ("toda persona es libre de elegir su profesión") y en el artículo treinta y siete ("todos los españoles podrán asociarse libremente para los distintos fines de la vida humana"), y constituía, además, "un triple atentado contra Dios, contra la civilización y contra la humanidad", ya que las órdenes religiosas tenían como fines "dar culto a Dios, difundir la cultura y consagrarse a obras de beneficencia y de caridad."

Por todo lo expuesto concluían los redactores afirmando que "si tales anomalías jurídicas llegasen a prevalecer en las Cortes" serían determinantes de la división entre los españoles, situación que era preciso "evitar a todo trance."⁽¹²⁾

El mismo boletín que incluía el texto de este documento ampliaba en otro lugar la noticia indicando que el mismo iba firmado por los católicos de Tuy, Vigo, Redondela, Porriño, La Guardia, Puenteareas, La Cañiza, Bayona "y demás pueblos del Obispado", señalando que había sido remitido "a todos y cada uno de los Sres. Diputados que forman la circunscripción de la provincia."

A continuación de este suelto se publicaba otro por el que se daba cuenta de que, con independencia de la mencionada exposición, habían sido enviados al gobierno "seis voluminosos paquetes que contenían la protesta enérgica de las mujeres católicas de la Diócesis, a quienes representaban las treinta mil cuatrocientas veintiocho firmantes."

(12) 1 de septiembre de 1931, "Una exposición", BOE de Tuy, año 72, 15 de noviembre de 1931, núm. 19, págs. 457-462.

Incluía este número del boletín, por último, la noticia de que "firmado por millares de personas, todas de reconocida solvencia, y muchas de ellas de destacada personalidad", había sido remitido al presidente de la República y al del Congreso de los diputados, un telegrama en favor de las ordenes religiosas, "castigadas tan duramente en alguno de los artículos de la Constitución":

"Siendo incompatible, nuestra conciencia católica y sentimientos de la verdadera libertad, igualdad y fraternidad, con las medidas de excepción votadas en las Cortes constituyentes contra las ordenes religiosas integradas por millares de ciudadanos españoles; con su disolución y nacionalización de sus bienes; y la prohibición paradójica, en la naciente República de trabajadores, de que tales ciudadanos puedan dedicarse a los trabajos de la enseñanza, del comercio o de la industria; protestamos de tales acuerdos que van contra el sentir de millones de españoles, y gestionamos desde hoy, con ahínco, la modificación del Código de persecución a beneméritos compatriotas; transformándolo en Constitución igualitaria para todos los españoles y respetuosa con la Religión, la familia y la propiedad. Fundamentos los más firmes de la paz y grandeza material de los pueblos. Enviamos mensaje suscrito por millares de firmas."⁽¹²²⁾

No cabe duda que las palabras del Dr. GARCÍA habían producido fuerte impacto entre sus fieles a juzgar por las noticias que continuo insertando el boletín de su diócesis, el más prolífico, entre los examinados, en publicar este tipo de reseñas. En efecto, en el número correspondiente al 15 de octubre incluía la relativa a la inauguración por el obispo del local de la "Asociación Católica de Padres de Familia", acto en el que los asistentes habían aprobado, "por aclamación", un telegrama dirigido al presidente del gobierno en el que solicitaban que la nueva constitución respetara "la santidad del vínculo matrimonial entre los

(122) S.I., "Crónica diocesana.- Los católicos de la diócesis en acción", BOE de Iuj, año 72, 15 de noviembre de 1931, núm. 19, págs. 464-467.

bautizados" (lo cual equivalía a pedir que fuera imposible la disolución del matrimonio para casi todos los españoles, fueran practicantes o no del catolicismo en su mayoría de edad), "los derechos de los Padres a la educación de los hijos y la libertad de las Órdenes Religiosas, en muchas de las cuales -puntualizaban- fuimos educados nosotros."

A continuación de esta noticia añadía el boletín lo siguiente:

"Desde la presentación a las Cortes constituyentes del radicalísimo Proyecto de Constitución que tan justamente alarmadas tiene a todas las conciencias católicas, todas las Asociaciones católicas de la Diócesis se esfuerzan de consuno en protestar respetuosa pero valientemente contra el espíritu sectario que informa a muchos de sus artículos y así se han cursado diversos telegramas al Sr. Presidente de las Cortes Constituyentes, protestando contra tamaño atentado como supondría la aprobación de aquéllos artículos."

(123) Estos telegramas eran los enviados por:

-La "Junta Diocesana de Acción Católica", expresando su rechazo por las "innovaciones anticatólicas" del proyecto de constitución y pidiendo que la cuestión religiosa se solventara mediante el oportuno concordato con la Santa Sede.

-La ya citada "Asociación de Padres de Familia", que se quejaba especialmente del divorcio, la enseñanza laica y la disolución de las órdenes religiosas.

-Las "Conferencias de Señoras y de Caballeros de S. Vicente", protestando contra las "tendencias irreligiosas" del proyecto.

-La "Asociación de Marías de los Sagrarios", quejándose de un texto que consideraba "gravemente lesivo familia, ruinoso sociedad, opresor conciencia ciudadanos."

-La "Asociación de Hijas de María", expresando su "hondo disgusto" por las "medidas antirreligiosas" del proyecto.

-Las "Asociadas de Acción Católica de la Mujer", que consideraban "inaceptable" el proyecto, por cuanto atacaba los sentimientos de los católicos, que eran la mayoría de la nación.

- Los "Socios de la Juventud Católica", que enviaban su "respetuosa" y "varonil" protesta por el "irreligioso" proyecto, inaceptable para una nación

También los católicos de Coria, según la noticia recogida por el boletín de esta diócesis, habían asumido la iniciativa de dirigirse a las autoridades políticas en demanda de la debida modificación del proyecto de constitución. Así, diversas entidades piadosas, a cuya cabeza figuraba la Acción Católica diocesana, habían cursado el oportuno telegrama al presidente del Gobierno expresándole que el proyecto hería los sentimientos de los creyentes, toda vez que "el ateismo del Estado, el divorcio, la escuela única y laica y la negación del derecho de Asociación a las órdenes religiosas, atacan francamente a los derechos de la Iglesia, y si llegaran a aprobarse, asentarían un golpe mortal en la esfera oficial a nuestra sacrosanta religión." A juicio de los firmantes, tal determinación no dejaría de ser un "error grande", ya que, en un momento en que las naciones, tras la postguerra, "vuelven sus ojos a la religión como única salvadora de los principios de justicia y de orden en que se apoya la sociedad", sería España, "la nación católica por excelencia", la que proclamara su "incompatibilidad" con la

católica por excelencia.

-La "Asociación de la Medalla Milagrosa", solicitando que fuera reformado el "sentido católico" del proyecto, especialmente en los artículos sobre la religión, el matrimonio, la enseñanza y la familia, "en consonancia con la voluntad de la mayoría del pueblo español."

-Los "Socios del Apostolado de la Oración", exponiendo su "completa disconformidad" con el proyecto en materia religiosa y pidiendo que se respetara la "libertad de la conciencia católica del país."

-Los "Socios de la Adoración Nocturna", expresando su "plena disconformidad con el irreligioso Proyecto de Constitución", contrario a los sentimientos de la mayoría de los ciudadanos.

-Los "Asociados de la Orden Tercera de San Francisco", manifestando su "profundo disgusto contra el Proyecto de constitución", que estimaban ofensivo para las creencias católicas de la mayoría de los españoles.

(s.f., "Asociación Católica de Padres de Familia" y "Más telegramas". BGE de Tuy, año 72, 15 de octubre de 1931, núm. 17, págs. 432-434.)

religión, colocando "fuera de la ley" a los católicos, los cuales "si esos principios sectarios desapareciesen, prestarían una cooperación decidida y sincera al nuevo régimen, ya que para la Iglesia son indiferentes las formas externas de gobierno". De ahí que, en base a todo lo expuesto, los católicos extremeños acabaran demandando al presidente que utilizara su influencia "para que sea profundamente reformado en sentido católico el proyecto de Constitución".⁽¹²⁴⁾

Para terminar con esta breve referencia que, como hemos indicado, realizamos a mero título de ejemplo de la forma en que los católicos secundaron las palabras de sus obispos, aludiremos a la publicación que efectuaba el boletín diocesano de Calahorra, en su número de septiembre, del telegrama enviado por la "Junta provincial Diocesana de La Unión de Damas Españolas del S.C. de Logroño" al presidente de las Cortes y por el cual, tanto en su nombre como en el de las "Juntas Arciprestales y Parroquiales, Asociaciones y Obras Católico-femeninas federadas", venía a unirse a las peticiones para que no prosperara el laicismo en la futura constitución, así como para que en todo lo relativo a la cuestión religiosa se procediera de acuerdo con la Santa Sede.

Tras el texto del telegrama, y pese a la representación que la citada Junta asumía en él, se incluía su invitación a las entidades representadas a fin de que también se dirigieran separadamente a las Cortes, "para que mejor resalte la trascendencia numérica y representativa de las diversas entidades comprendidas en esa expresión global."⁽¹²⁵⁾

(124) 16 de septiembre de 1931, "Crónica diocesana: Una digna protesta", BOE de Coria, año 66, 15 de octubre de 1931, núm. 20, págs. 321-322.

(125) s.f., "Acción Católica Femenina: Ante el proyecto de Constitución", BOE de Calahorra, año 72, 28 de septiembre de 1931, núm. 13, pag. 340.

En los documentos de los fieles hasta aquí examinados se observa el protagonismo femenino de muchos de ellos, pese a los calificativos que, en algunas ocasiones, como hemos visto en nota a pie de página en el telegrama cursado por los "Socios de la Juventud Católica" de Tuy, quería darse a la intervención de los fieles masculinos, como si pretendieran que no se dejara de constatar que la defensa que asumían de su fe era, en todo caso, respuesta a su "varonil" actitud. Respecto a la numerosa intervención de mujeres católicas hasta aquí vista preciso es destacar la que sin duda fue la más relevante de este período. Nos referimos a la presentación que "una Comisión de la Unión Católica de Damas Españolas" hizo el 29 de septiembre al presidente del Congreso de un escrito avalado por 1.401.900 firmas⁽¹²⁶⁾ recogidas en toda España, a excepción de Cataluña, las cuales habían sido entregadas anteriormente. En el escrito presentado por la citada comisión, que había sido acompañada en este acto por GIL ROBLES, se solicitaba que las relaciones entre la Iglesia y el Estado fueran objeto del oportuno concordato con la Santa Sede, que se enseñara la religión en las escuelas, que se respetara la familia, que no se expulsara a las órdenes religiosas y que se permitiera el regreso de los prelados que se encontraban fuera de sus diócesis contra su voluntad.⁽¹²⁷⁾

(126) En unos boletines la cifra que se publicó fue la que hemos recogido en el texto, en otros la de 1.401.595. ARBELLOA da en su obra esta última cifra. ARBELLOA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España*, págs. 44-45.

(127) s.f., "Las mujeres españolas ante las Cortes", BOE de Tortosa, año 73, 15 de diciembre de 1931, núm. 21, pág. 399. Esta noticia fue publicada por muchos boletines diocesanos, sirva meramente como ejemplo, entre los consultados:

- "Las mujeres españolas ante las Cortes", BOE de Segovia, año 76, 15 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 421-422.

- "Por la cuestión religiosa. Entrega de firmas al Congreso", BOE de Astorga, año 79, 15 de diciembre de 1931, núm. 24, págs. 419-420.

- "Las mujeres españolas ante las Cortes", BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de diciembre de 1931, núm. 698, págs. 986-987.

Las noticias hasta aquí recogidas no dan cabal cuenta, empero, de la magnitud de la reacción de los católicos en el deseo de secundar la campaña que pretendía promover la jerarquía. Incluso "en muchas diócesis corrían impresos de manifiestos y peticiones, que se llenaban con firmas de católicos de toda edad y condición."⁽¹²⁸⁾ El resultado de tal despliegue fue que desde finales de agosto comenzaron a llegar al palacio de Congresos masivas solicitudes en demanda de que la futura constitución respetara los seculares derechos de la Iglesia.⁽¹²⁹⁾

7.2. Los "anticatólicos".

Hay que dejar constancia, sin embargo, de que no todas las manifestaciones que se recibían en el Parlamento iban a ser favorables a la Iglesia; como ARBELLOA apunta "también llegaban peticiones, aunque en mucho menor número, de ayuntamientos, asociaciones y particulares, pidiendo la separación de la iglesia del estado: la disolución de las órdenes religiosas, especialmente de los jesuitas, y

Estos boletines incluían idénticas referencias detalladas con rasgos muy del estilo de la época y del público al que la noticia iba dirigida; así, se relataba que una "dama... descendiente de una de las heroínas de Zaragoza y madre de cuatro hijos pequeños... no contenta con poner su firma, pide que los maten antes que privarles de la enseñanza católica", o que "algunas ciegas" firmaron con el sistema Braille, u "otras que no saben escribir" lo habían hecho con sus huellas dactilares.

(128) ARBELLOA, Víctor Manuel, op. cit., pág. 44.

(129) Ver la relación completa de dichas solicitudes en la obra citada de Manuel RAMÍREZ JIMÉNEZ, *Los grupos de presión en la Segunda República española*, págs. 226-227.

confiscación de sus bienes; la implantación del divorcio; la supresión del presupuesto del clero, etc."⁽¹³⁰⁾

Relevantes fueron las dos noticias publicadas por "El Sol" sobre estas actuaciones: la primera hacía referencia al escrito "Firmado por más de 300 ciudadanos, entre ellos bastantes mujeres", que una "comisión de anticatólicos" había entregado al presidente del Gobierno el 9 de septiembre de 1931. Dicho escrito comenzaba copiando una instancia que habían remitido el 27 de agosto anterior al presidente de la Comisión parlamentaria encargada del proyecto, JIMÉNEZ DE ASÓA, y cuyo texto queremos insertar íntegro como ejemplo no solo de los dos mundos en que en aquellos momentos se dividía España sino, también, de los, a veces, singulares planteamientos que hacía cada uno de estos mundos; pues, si paradójicas nos han parecido en ocasiones las palabras de algunos grupos de fieles o de los propios miembros del episcopado, no lo era menos la petición que aquí se hacía sobre la administración del bautismo, referida, nada menos, que al pleno uso de las facultades civiles y políticas, como forma de respeto a los derechos del recién nacido, petición que, extrañamente, se unía, además, y basada en la misma razón, al sacramento de la confesión, enlazándose ambas peticiones, para mayor confusión, en un escrito que, en principio, iba referido a la manifestación de una determinada postura en el tema de la futura constitución.

"Los abajo firmantes, verdaderos padres de familia españoles, conscientes de sus actos, en la plenitud absoluta de su condición jurídica y política, respetuosamente ruegan tenga en consideración lo siguiente:

La Prensa publica la noticia de que un grupo de boyolistas o similares, arrogándose la

(130) ARBELDA, Víctor Manuel, op. cit., pág. 45. En la obra citada de RAMÍREZ JIMÉNEZ también se incluye la relación de las peticiones a las Cortes constituyentes contrarias a la Iglesia. Ver págs. 227-228.

representacion de los padres de familia espanoles ha pedido en colectividad la supresion de unos articulos de la futura Constitucion por estimar que lesionan sus convicciones y sus conciencias."⁽¹³¹⁾

«Como quiera que ello constituye, a nuestro juicio, una coaccion, o mejor dicho, una demostracion de maniobras que del norte han trascendido a toda España en estos dias,"⁽¹³²⁾ es por lo que nosotros acudimos a V.E. para manifestarle que esos señores que ayer le visitaron no llevaban nuestra representacion, y que les desautorizamos, y, por lo tanto, le rogamos no solamente que se discuta todo lo que ellos pidieron se suprimiera del proyecto de Constitucion, sino que solicitamos, como españoles democratas y respetuosos con todas las religiones, que no se autoricen los bautismos ni las conresiones hasta que el interesado este en pleno uso de sus facultades civiles y politicas, pues constituye un abuso de fuerza, de superioridad y hasta de ultraje en la persona de un recién nacido la imposicion de un acto que en el mañana puede estar en pugna con sus sentimientos y su conciencia."

Dirigiéndose ya al presidente del gobierno añadian que se ratificaban en el contenido de este escrito, ampliando ahora "la adhesión de muchísimos españoles que no pudieron hacerlo entonces" y acababan expresandole su desagrado "por la forma insolente e irrespetuosa que ante el presidente se han conducido dos comisiones representativas de catolicos de bisuteria, quienes, por su condicion social, economica y hasta cultural, deben dar ejemplo, especialmente de educaci3n, serenidad y templanza."⁽¹³³⁾

(131) No nos es posible determinar a qué grupo se aludia.

(132) Ver sobre el particular la nota 274 del capítulo "La Iglesia ante la Republica".

(133) "El Sol", 10 de septiembre de 1931. Tampoco nos es posible saber en este caso a qué comisiones aludían, aunque, por la cercanía de las fechas y las palabras que, como hemos visto, había pronunciado, según "El Debate", ALCALA ZAMORA, quizá una de ellas fuera la que representaba a las asociaciones católicas de Madrid.

Aludía la otra noticia, publicada el mismo día en que en las Cortes se iniciaba el debate de la cuestión religiosa, al reparto, el día anterior, en las puertas del palacio del Congreso, de unas hojas en las que mujeres españolas no católicas, haciéndose eco de los escritos y firmas presentados por las creyentes, pedían que la República fuera laica y que se expulsara a todas las órdenes religiosas confiscándose sus bienes o que -como suave alternativa a la drástica petición anterior- caso de permitirse su existencia, se permitiera igualmente la de asociaciones no católicas que pudieran practicar privadamente sus ritos. El estilo y planteamiento de estas hojas, que habían sido distribuidas por "un grupo muy numeroso de señoras", según indicaba el diario, eran de mayor nivel que la solicitud a que acabamos de referirnos, aunque el gesto elegido para dar a conocer la petición fuera el más popular y menos protocolario de los hasta aquí vistos. Lo singular de este protagonismo femenino en tiempos en que la militancia política de la mujer parecía estar constreñida, salvo raras excepciones, al ámbito de la defensa de la religión, nos lleva a dar la debida relevancia a este escrito, aunque, como en el caso anterior, ello exceda de los límites de este trabajo.

"Señores diputados de las Cortes constituyentes: Sólo han llegado hasta vosotros unos pliegos con firmas más o menos conscientes, y que en mayor o menor número han sido recogidas por ciudadanas católicas.

"Apoyándose en estas firmas, y queriendo hacer ver que España entera profesa esta religión, aspiran en sus peticiones a que nuestra naciente República quede tutelada por el catolicismo.

"En nombre de los millares de españolas que no profesan religión alguna; en nombre de los millares de españolas que profesan religiones distintas de la católica, igualmente respetables, os pedimos que no legisléis solamente para aquellas ciudadanas católicas, ya que no representan a la totalidad de la mujer española ni mucho menos.

«El Estado no puede imponer en su nueva estructuración determinada creencia religiosa a las conciencias libres, como no impone a los ciudadanos determinada doctrina científica ni determinado sistema filosófico.

«Para las españolas libres de creencia religiosa, toda relación entre el Estado y la Iglesia católica será una coacción a su sentir. Para las españolas que profesan religiones distintas, esta relación, por mínima que ella sea, supone un reconocimiento de veracidad y superioridad en una religión que no es la suya. En uno y otro caso, numerosos seres quedarán heridos en lo íntimo de su conciencia.

«En su virtud, las ciudadanas no católicas españolas pedimos a las Cortes constituyentes:

«19. Que la República española sea absolutamente laica.

«20. Que sean expulsadas todas las Congregaciones religiosas católicas y sus bienes devueltos a la sociedad, de donde, al amparo de su situación privilegiada, han salido.

«30. Que de no ser expulsadas se permita el establecimiento y convivencia en España de cuantas Asociaciones no católicas quieran organizarse para la práctica interna de sus ritos.

«¡Diputados de las Constituyentes: legislad para todas las españolas!»

8. La actuación de la comisión de metropolitanos y de los sacerdotes diputados.

Como el cardenal VIDAL había adelantado al Secretario de Estado vaticano en su carta-informe de 27 de junio, la composición de la cámara resultante de las elecciones no iba a ser, desde luego, favorable a los intereses de la Iglesia; extremo que, una vez celebradas, le tendría que confirmar en su nueva carta de 12 de agosto. (135)

Determinados grupos, especialmente los agrarios o vasconavarros, iban a realizar, secundando los deseos de la jerarquía, denodados esfuerzos por defender tales intereses, intentando mitigar el articulado resultante del proyecto elaborado por la Comisión parlamentaria. Desde el punto de vista que aquí nos interesa, singular relevancia tendría la actuación del estamento eclesiástico dentro y fuera de las Cortes.

(135) En esta otra carta hacia VIDAL una descripción de los hechos acaecidos desde su escrito anterior, entre ellos, la votación del Estatuto de Cataluña, las actuaciones del ministro de Justicia en relación con los haberes del clero, su personal impresión sobre la actuación del cardenal SEBURA, a la que ya nos hemos referido en el capítulo anterior y, lo que aquí más nos interesa, su parecer sobre las enmiendas a presentar en las Cortes y sobre los diputados que habrían de defenderlas y sobre el mensaje a elevar por su provincia eclesiástica, temas estos igualmente abordados ya en este mismo capítulo. Con carácter previo a estas cuestiones también informaba de la carta que le había escrito a ALCALA ZAMORA el 3 de agosto, para, a la vista del "barrido sabor radical" de las nuevas Cortes -en las que "con tacto y buena voluntad en los dirigentes podrían disminuirse los estragos que se proponen causar en materia religiosa y social"- hacerle "alguna observación respecto al proyecto de Constitución y a la conveniencia de acudir a la Santa Sede y ponerse en

El día 14 de agosto los sacerdotes Santiago GUALLAR y Ricardo GOMEZ ROJA, diputados agrarios por Zaragoza y por Burgos, respectivamente⁽¹³⁶⁾ habían escrito al arzobispo de Tarragona y -según la noticia que nos da ARBELLOA-⁽¹³⁷⁾ a todos los obispos. En dicha carta, motivada por "La difícilísima situación en que están colocados los más altos intereses de la S. Iglesia, y la no menos difícil situación

relaciones con ella", carta que adjuntaba como anexo a la de FACELLI, así como la contestación dada por el presidente, en la que, tras aludir a la constitución de las Cortes y a la táctica equivocada de los elementos de derecha, le manifestaba el deseo de entrevistarse con él; pero VIDAL, tal como expresaba al Secretario de Estado vaticano, no considerando prudente ir a Madrid, pensaba mandarle un sacerdote "listo y hábil" para que se entrevistara en su lugar, "así se evitan compromisos, se explora su ánimo y hay más tiempo para meditar si conviene dar respuesta y cuál haya de ser."

Interesante es destacar, llegados a este punto, la personal impresión que el cardenal transmitía en su carta sobre la composición del Congreso y alguno de sus diputados, y en la que, no sabemos si por propio convencimiento o para no alarmar al Vaticano, no dejaba de traslucir un cierto optimismo sobre el posible desenvolvimiento de los hechos: "En las Cortes los diputados no están todavía bien clasificados; hay que aguardar para ello los debates serios. Parece que el grupo más numeroso es el de Alianza Republicana, unos 120 diputados, acudido por Lerroux, de quien le hablé en mi carta anterior, y por Azana, que es muy radical y de malas costumbres, pero enérgico: según recientes manifestaciones de Lerroux, quieren respetar las creencias y las órdenes Religiosas. Sigue en número el grupo socialista, con 114 diputados de todos los matices; de él forman parte el Presidente de la Cámara, Sr. Besteiro, enemigo de violencias e intelectual, pero muy laicista, y los Ministros Indalecio Prieto, muy desprestigiado y fracasado, Fernando de los Rios, que también ha perdido mucho y se halla desconcertado, y Largo Caballero, que, por ahora resulta el más gubernamental de entre ellos. De los socialistas nada bueno puede augurarse para la Iglesia, aun cuando algunos no sean partidarios de la violencia. Sigue después en importancia el grupo radical-socialista, de 50 a 60 diputados, acudido por el Ministro de Instrucción Marcelino Domingo, y por el de Fomento, Alvaro de Albornoz, ambos muy avanzados. Hay después la Esquerda Catalana, los autonomistas o regionalistas y los de la Derecha Republicana. Creo que entre los más y menos moderados podrian sumarse unos 100 diputados. De unas Cortes así constituidas no se puede esperar gran cosa para los derechos de la Iglesia; no obstante, si se las dirige bien, con tino, sin violencias ni excitaciones, mucho se podría conseguir en bien de la Religión; hay muchas personas que oran y que trabajan." *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 202-209.

(136) Ya hemos indicado en la nota 47 del capítulo "La Iglesia ante la República" los nombres y filiación política de los sacerdotes diputados.

(137) ARBELLOA, Victor Manuel, op. cit., pag. 33.

de la minoría católica para defenderlos, con eficacia, en el Parlamento", proponían, a iniciativa de varios sacerdotes, que en aquellas diócesis donde hubiere alguno de ellos "qualificado, bien relacionado y hábil", fuera enviado a Madrid para trabajar cerca de los diputados de izquierdas, "para que éstos, más comprensivos y respetuosos de los derechos de la Iglesia, suavicen asperezas e influyan cerca de sus jefes de partido, al enjuiciar el problema religioso". La labor de estos sacerdotes, que deberían conectar con los diputados que suscribían la carta, habría de ser, añadian, "tan callada y prudentísima, que jamás dé la sensación de un plan de defensa colectiva, sino de trabajos personales".⁽¹³⁸⁾

En contestación a esta carta el cardenal VIDAL designaría al Dr. Luis CARRERAS, a cuyas gestiones cerca de ALCALÁ ZAMORA para tratar de la cuestión de la remoción del cardenal SEGURA, ya hemos aludido en el epígrafe 9.6 del capítulo anterior.

Con independencia de todos los temas relacionados con el cardenal SEGURA, el obispo de Vitoria y la detención del Dr. ECHEGUREN, que CARRERAS se vió obligado a discutir con ALCALÁ ZAMORA y con LERROUX, la cuestión central de sus visitas iba referida, como hemos visto, a tratar de la futura Constitución, tema en el que, como ya expusimos en el capítulo anterior, los hechos aludidos no dejaban de representar una gran dificultad para el logro de la adecuada concordia.

(138) Según indican BATLLORI y ARBELDA, de la provincia eclesiástica tarraconense sólo irían el Dr. Luis CARRERAS y el Dr. BALCELLS, el primero enviado por el cardenal VIDAL y el segundo por el obispo de Barcelona, Dr. IRURITA. Según carta del Dr. BILBAO, obispo de Tortosa, de las restantes diócesis tan sólo unas veintitrés habían enviado a Madrid un representante. *Església i Estat durant la segona...* pág. 215.

Tras relatar estos extremos en el informe que el sacerdote enviaría al cardenal VIDAL por carta probablemente escrita a finales de agosto, aunque no fechada, se centraría CARRERAS en referirle las impresiones de los dos altos dignatarios sobre la cuestión religiosa en la futura Constitución.

Según su relato, ALCALÁ ZAMORA le había manifestado su agradable sorpresa al constatar, cuando estimaba que era el único miembro del gobierno interesado en incidir en el Parlamento a favor de la Iglesia, que también Fernando DE LOS RÍOS -según él "el ministro más radical en materia religiosa"- no era partidario de la redacción dada en el proyecto al "artículo 15"⁽¹³⁹⁾, ya que "no se debía ir a la disolución de las órdenes Religiosas, y mucho menos a la confiscación de sus bienes"; tan sólo en la cuestión del concordato el ministro no era tan favorable, sin embargo si pretendía, en lo tocante al presupuesto del culto y clero, respetar "los derechos adquiridos por todos los actuales beneficiarios de cargos eclesiásticos", solución que permitiría soslayar las dificultades del momento y posibilitaría su tratamiento a través del concordato.

También al hablar de LARGO CABALLERO ALCALÁ ZAMORA se había mostrado optimista al contar a CARRERAS que le había indicado que "no se debía excluir a nadie de los beneficios de la República", añadiendo, en lo tocante a LERROUX, que este era partidario decidido de ir a un concordato y que había señalado a su partido, "actitudes de gran moderación",

(139) Al reproducir este texto indican BATLLORI y ARBELDA que no comprenden por qué se refiere a este artículo, cuando los relativos a la cuestión religiosa eran los números 8 y 12 en el anteproyecto, los números 3, 24 y 25 en el proyecto parlamentario y los números 3, 26 y 27 en el texto definitivo de la Constitución, *Església i Estat durant la segona...*, I, pag. 250, nota 3.

por lo que, como resumen de sus palabras, veía la situación, según relataba el sacerdote, de la siguiente manera:

"Apoyándome en el Ministro de Justicia y gran parte de los socialistas, alcanzar la mayoría necesaria para modificar radicalmente el artículo 15; apoyándome en Lerroux y los suyos hacer aprobar la fórmula concordataria. Tan optimista me hallaba, que aún consideraba salvos a los Jesuitas, cuya expulsión en algunos momentos ha parecido imposible evitar."

Así las cosas había tenido lugar la aprehensión de los documentos que el cardenal SEGURA enviaba al Dr. MUGICA, lo que oscurecía alarmantemente ese planteamiento, sobre todo cuando tales documentos fueran conocidos por los miembros de la Cámara.

Frente a las optimistas manifestaciones hechas por ALCALÁ ZAMORA respecto a tres de los miembros de su gobierno, las impresiones dadas por el ministro de Estado, Alejandro LERROUX, al Dr. CARRERAS hacían hincapié en la dificultad de ciertos ministros para saber actuar "en la zona templada", factor que no había que olvidar. "aunque esté compensado por la noble actitud y comprensión lúcida del Presidente y de otros Ministros igualmente comprensivos", a lo que había que añadir, en comentario contrario a la opinión dada por ALCALÁ ZAMORA a VIDAL en carta de 6 de agosto,⁽¹⁴⁰⁾ que "el Parlamento no raya tampoco a mucha altura, y hay allí una multitud tumultuosa difícil de dirigir", por lo que se encontraban en situación paralela, tanto los "elementos inteligentes de la Iglesia" como los republicanos gubernamentales, "debiendo contener unos a la extrema derecha y otros [a] la extrema izquierda," de ahí la necesidad de colaborar con tacto para el triunfo

(140) Ver la nota 166 de este capítulo.

de "esa zona templada, en que debe resolver la República todos sus problemas."

Descendiendo a explicar su actitud personal, confesaba LERROUX su ideología laica, según la cual su ideal, como político, sería "la verdadera, absoluta separación de la Iglesia y del Estado", mas, como gobernante, tenía claro que no era el momento oportuno de abordar tal situación, a la que debería irse gradualmente; y no era oportuno porque, añadía, "la Iglesia representa en España la realidad histórica de máxima eficacia civilizadora", la creadora de los valores de ciencia y arte transmitidos como patrimonio cultural y "la fuerza más poderosa que ha tenido la unidad espiritual de España", siendo "una realidad presente, de una vitalidad mayor de lo que sospechan muchos de sus adversarios" y estando adherida a ella la mayoría de la nación. Por todo lo cual concluía expresando su interés en buscar los caminos para un concordato, lo cual le parecía "la posición moderada a que todos hemos de propender".

Concluida la entrevista, CARRERAS había entregado al ministro de Estado unas "posibles enmiendas al proyecto de Constitución, inspiradas en ese criterio templado que las circunstancias aconsejan imperiosamente, y que yo había sometido antes a elevados y expertos juicios."⁽¹⁴⁷⁾

(147) Según indican BATLLORI y ARBELDA se trataría probablemente del nuncio y de alguno de los diputados sacerdotes y sus consejeros. Los citados autores reproducen estas enmiendas, conservadas en el archivo particular del Dr. CARRERAS, en un cuadro comparativo con el anteproyecto de 6 de julio, el proyecto de 18 de agosto y el texto definitivo de la Constitución, haciendo los oportunos comentarios sobre determinadas modificaciones en su texto:

"18 No existe religión del Estado.

"La Iglesia Católica es considerada como Corporación de derecho público, y su situación jurídica dentro del Estado se determinará por medio de Concordato.

"28 No exista religión del Estado.

"La situación legal de la Iglesia Católica y sus relaciones con el Estado se fijarán en un Convenio o "modus vivendi" concertado entre ambas partes (y ratificado por el Parlamento).

El tema de las enmiendas, planteado ya por VIDAL, como hemos visto, a finales del mes de julio, era objeto de preocupación esencial de los sacerdotes diputados, como consta por la carta que José AYATS dirigió al cardenal el 13 de agosto y en la que, en aquellas fechas, le informaba de que aún no había sido emitido el dictámen de la Comisión parlamentaria, aunque, añadía, por las noticias que tenía, era de temer que en este se acentuara el radicalismo sobre el anteproyecto elaborado por la Comisión jurídica asesora. Respecto a las posibles enmiendas a presentar para defender los derechos de la Iglesia, veía que no habría dificultad en ello, creyéndose a lograr que algunos diputados las hicieran suyas, aunque su impresión personal era que estas, "per raonables que siguen", no prosperarían.⁽¹⁴²⁾

«38 No existe religión del Estado.

«Dada la efectiva importancia social que la Iglesia Católica tiene en España, su situación jurídica y relaciones con el Estado se regularán en forma concordataria.

«(Mótese que el proyecto de la Comisión Parlamentaria, art. 8 dice: "Son de la exclusiva competencia del Estado español las materias siguientes:...22 Relaciones entre la Iglesia y el Estado y régimen de cultos".)

«La libertad de conciencia y de creencia es inviolable. El derecho de profesar y practicar libremente cualquiera religión y la libertad del ejercicio, privado y público, del respectivo culto quedan garantizados en el territorio español. Salvo el respeto debido a la moral cristiana (o bien a las buenas costumbres) y al orden público, las leyes no podrán suprimir o restringir el libre ejercicio, privada y públicamente, de ningún culto.

«Nadie, especialmente ningún funcionario o miembro de la fuerza armada, podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas, ni obligado a formar parte de una confesión religiosa, ni a participar en un acto o ceremonia de culto, así como no podrá ponerse obstáculo a la práctica de sus deberes religiosos.

«Las asociaciones religiosas, respetadas en su constitución y régimen interior, quedarán por lo demás sujetas a las leyes generales del Estado.

«La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución en orden al nombramiento de Presidente de la República."

Estas enmiendas, sin embargo, no serían presentadas en las Cortes, aunque serían similares a ellas, las defendidas por Juan CASTRILLO, del partido de ALCALA ZAMORA. *Església i Estat durant la segona...* I, págs. 249-258.

(142) *Església i Estat durant la segona...* I, pág. 212.

El Dr. CARRERAS había estado en contacto con el padre AYATS según manifestaría a VIDAL en su citada carta, aunque sus impresiones sobre las enmiendas que había presentado este a su partido no eran demasiado favorables ("i són poc fines de redacció per triomfar.") opinión a la que hay que añadir la del sacerdote tarraconense sobre sus hermanos diputados, en general, descalificadoras: "Al meu retorn també escriuré als dos canonges firmants, - por la carta de 14 de agosto que Santiago GUALLAR y Ricardo GÓMEZ ROJÍ habían enviado a VIDAL- i així els diré quelcom d'esverament. S'equivoquen de ple. Tampoc ho fan gaire be quan parlen,... Els capellans, incontinents per parlar, i el Nunci tem de ficar-s'hi massa perquè no diguin que entra endins del Parlament si els capellans no eren prudents a callar la seva intervenció".⁽¹⁴³⁾

El amplio tratamiento que Víctor Manuel ARBELLOA da en su citada y relevante obra *La semana trágica de la Iglesia en España*, a los debates que tuvieron lugar en el Congreso en relación con los artículos tercero y vigésimo cuarto y, entre ellos, como es obvio, a las intervenciones de los sacerdotes diputados, nos exime de profundizar aquí sobre el papel jugado por ellos en defensa de una redacción de estos artículos más favorables a los intereses de la Iglesia. Tan sólo aludiremos en el oportuno lugar,⁽¹⁴⁴⁾ por lo que de singular tuvo respecto a sus hermanos en el sacerdocio, a la postura adoptada por el deán de la catedral de Granada, Luis LÓPEZ DORIGA. En este momento, sólo nos resta señalar, para finalizar nuestra referencia a estos diputados, que la opinión del cardenal VIDAL sobre ellos no estaba muy alejada de la expresada por el Dr. CARRERAS, como corrobora la frase que aparece en la carta que escribió al nuncio el 29 de agosto: "No se si cabe fiar mucho de los diputados

(143) *Ibid.*, cit., pág. 259.

(144) Ver el capítulo "La legislación sobre la familia".

eclesiásticos, pues muchos de estos acostumbran a carecer de sentido político y de la realidad", y ello con independencia de los temores que le inspiraban la iniciativa transmitida por los sacerdotes GUALLAR y GÓMEZ ROJÍ, por dos veces reiterados en sus cartas al nuncio: "Considero peligrosa la actuación de algún diputado eclesiástico que pretende reunir en Madrid a sacerdotes representantes de todas las diócesis" y "Me temo que la iniciativa de los diputados sacerdotes, reuniendo en Madrid a tanta gente, no dé buen resultado; el éxito exige prudencia y reserva, cosas casi incompatibles con la multitud."⁽¹⁴⁵⁾ Las opiniones del cardenal sobre la actuación de los sacerdotes diputados y su sentido político no dejaba de ser acertada, como se desprende de sus intervenciones en el parlamento, para cuyo conocimiento y comentario nos remitimos a la obra citada.

Aunque también el mencionado autor habla del importante papel jugado entre bastidores por los metropolitanos españoles, no queremos dejar de referirnos con cierto detalle a su actuación durante los decisivos días de finales de septiembre y primeros de octubre de 1931, al ser la jerarquía el objeto central de nuestra tesis, completando, en lo posible, las noticias que nos da ARBELLOA y tomando como base para ello el *Arxiu Vidal i Barraquer: Església i Estat durant la Segona República Espanyola, 1931-1936*, obra en la que reiteradamente nos basamos por ser clave en este período y que también debemos a su notable trabajo y al del P. BATLLORI.

La carta que acabamos de citar del arzobispo de Tarragona a TEDESCHINI se había cruzado con otra del nuncio de singular importancia, fechada el día 26 anterior, y por la que este decía al cardenal que "con motivo de la discusión del proyecto de Constitución ha parecido a algunos

(145) *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 269, 276 y 278.

conveniente que, al tratarse de los artículos referentes a la Iglesia, se encuentre en Madrid una representación de los Excmos. Señores Obispos," idea sobre la que, sin detallar de quien había surgido realmente, pedía a VIDAL su parecer y el de sus sufragáneos y le proponía que él, el Patriarca de las Indias, Dr. Ramon PEREZ RODRIGUEZ y el arzobispo de Valladolid, integraran la citada representación. La respuesta del arzobispo fue, lógicamente, afirmativa, proponiendo que en lugar del Dr. Ramon PEREZ, se eligiera al cardenal de Sevilla, Dr. ILUNDAIN, por parecerle aquél de criterio integrista, al tiempo que insistía en la necesidad de hacer los debidos esfuerzos para lograr llegar a un "modus vivendi" entre la Santa Sede y el Estado.***

TEDESCHINI había solicitado al cardenal que procurara estar en Madrid antes del lunes 7 de septiembre, pues a partir de esa fecha comenzarían a debatirse en las Cortes los artículos de la constitución y el que primero interesaba a la Iglesia era el tercero: "No existe religión del Estado". Como ya hemos indicado en el capítulo anterior, otra solicitud se añadiría a la del nuncio, aunque, en este caso, sin relación con el proyecto de formación de la comisión de arzobispos y si para tratar del asunto del cardenal SEGURA: ALCALA ZAMORA pediría también a VIDAL que se desplazara urgentemente a Madrid, y allí permanecería el arzobispo, en unión del nuncio y de los restantes prelados convocados por este, desde el día 10 hasta el 24 de octubre, es decir hasta la finalización de los debates del articulado de la constitución relativos a la cuestión de la enseñanza, si bien haría un corto desplazamiento a Tarragona los días 22 a 29 de septiembre.

Una novedad se había introducido mientras tanto en el panorama religioso español motivada por la carta cursada el

(146) Op. cit., págs. 263-264, 266-269 y 275-276.

6 de septiembre por el cardenal PACELLI a VIDAL. En ella se daba respuesta a la propuesta del arzobispo tarraconense de constituir una Comisión permanente de metropolitanos, modificandola en el sentido de que se formara, según expreso deseo del papa, un *Ufficio di Presidenza* integrado por los cardenales.⁽¹⁴⁷⁾ Este nuevo órgano era, obviamente, independiente de la Comisión que se acababa de constituir con la exclusiva finalidad de apoyar los esfuerzos tendentes a la modificación del proyecto de constitución, aunque, dada la fecha de la carta del Vaticano, nacería al mismo tiempo que ella, pasando a ser presidida, con la renuncia del primado, por el arzobispo de Tarragona.

Antes de su viaje había recibido esta una petición concreta del nuncio relativa a la necesidad de que por lo menos la mitad de los miembros de Esquerra Catalana votaran en favor de la Iglesia, pues, si no, se corría el peligro de no lograr la mayoría que era necesaria, dada la composición de la cámara. Para alcanzar este propósito, TEDESCHINI pedía a VIDAL que hablara con integrantes del citado partido y, concretamente, además de MACIÀ, con HURTADO, CARNER, ANGUERA DE SOJO, CARRASCO FORMIGUERA, los directores de "El Matí" y NICOLAU D'OLIVER, gestión que, al menos hizo, tanto con MACIÀ como con CARNER, con quienes se entrevistaría personalmente aparte de reiterar por escrito su intervención cerca de sus correligionarios.⁽¹⁴⁸⁾

Según se desprende del *Arxiu Vidal i Barraquer*, la Santa Sede, por medio de una nota cursada al nuncio,⁽¹⁴⁹⁾ había pedido a este que se llegase a un acuerdo con el gobierno a fin de que se ofreciesen las necesarias garantías a la Iglesia para que esta pudiera decidir, con

(147) Op. cit. pág. 277.

(148) Op. cit., págs. 274, 295-296 y 346-348.

(149) Op. cit., págs. 289 y 318, nota 22.

conocimiento de su posible inmediato futuro en España, el problema planteado por el cardenal SEGURA. Cumpliendo tales instrucciones, TEDESCHINI y VIDAL se entrevistarían el 14 de septiembre con ALCALÁ ZAMORA y Fernando DE LOS RÍOS, en quienes el consejo de ministros había delegado el 28 de agosto, en unión de LERROUX, la negociación para llegar a una fórmula de concordia con la Iglesia.

Sobre esta entrevista se encargaría VIDAL de redactar una "nota reservada" resumiendo los puntos esenciales de lo acordado y de la cual daría traslado tanto a ALCALÁ ZAMORA, para que le confirmara si en ella se reflejaba exactamente lo tratado, como a Fernando DE LOS RÍOS, enviándola seguidamente al Secretario de Estado vaticano por carta del día 19. Antes de estas gestiones el cardenal había tenido buen cuidado de dar la debida cuenta a los metropolitanos que, con él, constituían la comisión⁽¹⁵⁰⁾ y, en función de ello, podía señalar en sus respectivas cartas a los políticos que estos habían recibido con pesimismo las propuestas gubernamentales, solicitando, por ello, mayores garantías.

"Green ellos, como también yo, que, atendidas todas las circunstancias actuales, las tradiciones y situación de las cosas de España, los grandes sacrificios que se piden a la Santa Sede, al Episcopado, al Clero secular y regular y a los fieles en general, no es mucho lo que el Gobierno ofrece conceder a la Iglesia.

"La Comisión está animada... del mejor espíritu de concordia, pero desearía asimismo que el Gobierno lo compartiera con el mismo anhelo y lo demostrara por medio de algún mayor sacrificio, concediendo algo más para satisfacer las ansias de la opinión católica y sensata y conseguir la paz y

(150) En aquellas fechas aún no se había incorporado el cardenal ILUNDAIN, por lo que VIDAL se refería al arzobispo de Valladolid y al Patriarca de las Indias.

tranquilidad de todos anhelada." (151)

Por estas razones el cardenal solicitaba al presidente una nueva entrevista con todos los miembros de la comisión, entrevista de la que igualmente redactaría la oportuna nota que, en esta ocasión, sólo remitiría al cardenal PACELLI en la carta antes mencionada.

En la nota relativa al día 14 destacaba el cardenal que la importancia del acuerdo que podía alcanzarse descansaba en "la fuerza moral que sobre sus correligionarios pueden ejercer los Ministros que son Jefes de partido", por lo que, con tal influencia y "contando, además, con la colaboración de elementos independientes y de derecha... un cálculo prudente permite alcanzar mayoría, aunque más o menos importante según los diversos puntos a votar que se refieren a la cuestión religiosa"; todo ello, no obstante, dependía de la solución satisfactoria del "asunto Segura".

Los puntos de conciliación a que podía llegarse eran los siguientes:

"12. Reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia en su estructura jerárquica, régimen propio, libre ejercicio - privado y público- del culto, y en la propiedad y uso de sus bienes.

"22. Convenio entre la República y la Santa Sede.

"32. Todas las Congregaciones religiosas serán respetadas en su constitución y régimen propios y en sus bienes, al menos los actualmente poseídos, quedando sujetos, por lo demás, a las leyes generales del país.

"42. Reconocimiento de plena libertad de enseñanza, o sea, que todo español, por sí o

por medio de cualquier asociación sin excepción alguna, pueda crear, sostener y regir establecimientos docentes, sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza, expedición de títulos profesionales y salvaguardia de la moralidad, higiene y seguridad del Estado.

«5º Presupuesto de culto y clero.

Conservar los derechos adquiridos por todo el personal eclesiástico que actualmente percibe consignación establecida en el presupuesto especial del Estado afecto a cargas eclesiásticas, y amortización de dichas partidas a medida de las vacantes que se vayan produciendo. Cesación de la subvención de culto y, en el nuevo presupuesto, consignación de una subvención global para conservación y reparación de las iglesias catedrales, colegiadas y parroquiales por el concepto de edificios históricos y artísticos.»

En relación con cada uno de estos extremos el cardenal reseñaba qué miembro del gobierno iba a encargarse de su defensa en el parlamento. Tan sólo un asunto había quedado en el aire y era el relativo a las cuestiones del divorcio y matrimonio, sobre el que el arzobispo incluía una "nota adicional":

"Acerca del divorcio se manifestó discordancia entre el criterio del Presidente y el del Ministro de Justicia, declarando este último que él defendería en el Parlamento el divorcio vincular y el no reconocimiento de efectos civiles al solo matrimonio canónico. Ambos estuvieron de acuerdo en que no consideran probable que se pueda impedir la votación de la Cámara en favor del divorcio. A lo sumo se podría obtener que se llevara a una ley especial la legislación acerca del matrimonio civil y del divorcio."

Por las razones que apuntaba VIDAL sobre la distinta opinión de los dos miembros del gabinete, las aludidas cuestiones habían quedado excluidas del conjunto de garantías que ofrecía el gobierno.

La descripción que hacia el cardenal de los temas que los representantes eclesiásticos y el presidente del gobierno provisional habían tratado en su reunión del día 18, era, dada la distinta finalidad de esta segunda nota, mucho mas personal y expresiva no sólo de las compromisos que se pedían al Estado sino también de las actitudes que debía adoptar la propia Iglesia. Las cuestiones abordadas en esta entrevista se habían centrado en desarrollar las ya tratadas en la anterior relativas a bienes y presupuesto eclesiástico, con independencia de la referencia al "asunto Toledo" que el cardenal incluía en el último punto de esta nueva nota. (122)

(122) "a) Bienes de los Institutos religiosos.- El respeto y garantías por parte del Estado se extenderá a todos los bienes institucionales, o sea, aquellos que respondan y sean conducentes al cumplimiento de su misión propia y que estén determinados por el objetivo de su fundación. Creo conviene sean registrados a nombre de las propias Congregaciones, y no en el de extranjeros o de persona intermedia. Sus bienes restantes estarán sujetos a las limitaciones generales de las leyes. No es de desatender al mal efecto que produce en la opinión pública el saber de algunas que son participes de grandes empresas industriales, como las de electricidad, por ejemplo. Asimismo deberá limitarse su actividad en la elaboración de productos industriales y trabajos de concurrencia comercial. Hay que aconsejar a las Congregaciones docentes que, sin demora, su personal se procure títulos profesionales.

"b) Presupuesto del Clero.- Confirmada la fórmula que consta en la "Nota reservada", he añadido al Sr. Presidente que la percepción de las dotaciones respetadas vitaliciamente a los actuales participes de las cargas eclesiásticas afectas al Presupuesto del Estado, podrá verificarse mediante una cantidad alzada, que cada año será entregada a los respectivos Prelados para su clero diocesano correspondiente, descontando el tanto por ciento que resultara para el promedio de vacantes que cada año suelen producirse en cada Obispado, según un cálculo prudencial. Con respecto a hacer entrar en las ventajas del Presupuesto eclesiástico a Seminarios, Palacios episcopales y casas rectorales, no ve dificultad en hallar fórmula congruente cuando convenga al arreglo definitivo de la dotación del Clero.

"c) Bienes de la Iglesia.- A fin de que se otorgue una subvención global para conservación y reparación de templos, palacios y casas rectorales por su valor histórico y artístico, el Sr. Presidente observó la dificultad de llevarlo a una Cámara en que predomina el criterio de no subvencionar a la Iglesia y a su culto, sin poder justificarlo de modo que el Estado aparezca como ejerciendo alguna forma de intervención dominical en los bienes de la Iglesia, objeto de dicha subvención. En el convenio o "modus vivendi" concertado entre ambas partes habria de precisarse tal intervención dominical y modo de aplicar las subvenciones, no pudiendo jamás dejar de reconocer el Estado a la Iglesia el pleno uso y usufructo gratuitos a perpetuidad del patrimonio eclesiástico."

Como nota última de los anexos que el arzobispo de Tarragona incluiría en su carta al Secretario de Estado vaticano del 19 de septiembre, figuraba la noticia de que, a petición del gobierno, la comisión dictaminadora del proyecto de constitución había accedido a solicitar al parlamento que se aplazase el debate del artículo 32 para que fuera conjuntamente tratado con el 24. Sistema con el que se lograba que no se abordara la cuestión religiosa hasta llegar a este último, a fin de que, mientras tanto, pudieran continuar sin entorpecimiento las negociaciones en curso. (153)

En la carta que, como continuación de esta, volvería a enviar VIDAL al cardenal PACELLI el día 22 y a la que ya hemos aludido anteriormente, (154) le reiteraría la buena disposición de ALCALA ZAMORA y del ministro de Justicia para intervenir en el parlamento y el interés del primero en defender a la Compañía de Jesús, sobre la que se preveía la solicitud de expulsión por parte de muchos parlamentarios, en base al artículo 24 del proyecto. Como colofón de esta carta figura esta reveladora frase de la actitud de VIDAL I BARRAQUER ante la República: "Si insistimos en informar detallada y objetivamente a Vuestra Eminencia, es porque espanta el solo pensamiento de una ruptura de relaciones, que consideramos fatal para la Iglesia y para España." (155)

Mientras así se afanaba el arzobispo de Tarragona en convencer al Vaticano de la necesidad de una solución armónica y pacificadora sobre la situación planteada por el primado, el gobierno, con el fin de lograr ese oportuno y

(153) Op. cit., págs. 318-323.

(154) Ver la nota 312 del capítulo "La Iglesia ante la República".

(155) Op. cit., págs. 328-333.

definitivo acuerdo, avisó, tras las nuevas entrevistas celebradas el día 29 por ALCALÁ ZAMORA con el nuncio y con el cardenal VIDAL, al ministro de Estado, LERROUX, que se encontraba en Ginebra, para que regresara urgentemente, dándose, por fin, cima a la remoción del cardenal SEGURA con las positivas consecuencias para el debate constitucional que, bajo un indudable prisma de confianza y optimismo, describiría VIDAL al cardenal PACELLI en su nueva carta del 1 de octubre. (66)

Pacificados ya los ánimos, según se creía, el nuncio y los arzobispos reunidos con él en Madrid pasarían a dedicar ahora todas sus energías a diseñar la estrategia de actuación para el debate parlamentario. Dos documentos son reveladoras de la intensa actividad desplegada por ellos durante los decisivos doce primeros días del mes de octubre de 1931. Deriva uno, como no podía ser menos, de la sistemática cuenta que de los trascendentales acontecimientos político-religiosos que se venían sucediendo daba el arzobispo de Tarragona al cardenal Secretario de Estado, en esta ocasión, por sus nuevas e importantes cartas de los días 11 y 16. El otro es fruto del esquemático y detallado diario que llevaría en aquellas fechas el colaborador del arzobispo Dr. CARRERAS, al que hay que agregar las noticias que el familiar del cardenal enviaba al vicario general de Tarragona.

En su carta del día 11 describía VIDAL como por medio de "unos pocos eclesiásticos y religiosos de confianza absoluta" los metropolitanos habían tenido la información necesaria, habiendo influido "a cuantos elementos podían ayudar a soluciones de concordia", y ejerciendo "consejo eficaz en el criterio y disciplina de los grupos parlamentarios".

(66) Ver el epígrafe 9,7 del capítulo anterior.

rios de derecha" a fin de "suscitar iniciativas e influencias en pro de formulas oportunas y viables". Por este sistema tanto la jerarquía como el nuncio habían podido hacer llegar su criterio a los diputados y defender los derechos de la Iglesia sin exteriorizar su actuación.

Mientras así hacían también se habían movido los arzobispos cerca de los miembros del gabinete: "La Comisión de Metropolitanos, además, ha tenido prudente y constante comunicación con los elementos del Gobierno, cerca de los cuales reservadamente convenía influir", y, así, desde el 3 al 6 de octubre, habían seguido en contacto con ALCALA ZAMORA, y el cardenal ILUNDAIN había visitado personalmente tanto al sevillano ministro de comunicaciones Diego MARTÍNEZ BARRIOS, como a Fernando DE LOS RÍOS, mientras VIDAL lo haría a Marcelino DOMÍNGO.⁽¹⁵⁷⁾

Quería destacar el arzobispo en su carta que los metropolitanos actuaban en íntima unión con el nuncio y que todos continuarían su misión hasta que se votara el texto constitucional relativo a la enseñanza, "última de las materias que interesan directamente a la Iglesia". Llegado ese momento sería cuando habría que "tomar resoluciones de gran responsabilidad, según el resultado definitivo de los acuerdos de las Cortes constituyentes." Sobre tales acuerdos también quería resaltar ahora su desconfianza explicando cómo la cámara era "dificilísima a manejar por el Gobierno" y actuaba en ella "con tenacidad insuperable". "el fermento revolucionario, sectario y tal vez masónico,⁽¹⁵⁸⁾ representado

(157) Cartas del familiar del cardenal VIDAL, Dr. VILADRICH, al vicario general de Tarragona, Dr. BORRAS, de 3, 5 y 9 de octubre de 1931. *Església i Estat durant la segona...*, I, Págs. 370-371, nota 4.

(158) Es remarcable la exquisita y proverbial prudencia del cardenal al enjuiciar los hechos, aquí representada por su opinión sobre la posible influencia de la masonería en la cámara, cuando, frente a ella, y como iremos viendo, otros prelados no dudaban en achacar a esta organización la mayoría de los ataques que sufrió la Iglesia durante la República. Es abundante la bibliografía sobre

principalmente por socialistas y radicales-socialistas." Ejemplo de ello eran dos actuaciones parlamentarias que, pese a haberse obtenido el aplazamiento del debate de los artículos que afectaban a la Iglesia, evidenciaban la disposición de los grupos citados para dificultar su buen resultado. Tales actuaciones se habían dado con ocasión de los debates relativos al voto de la mujer¹⁵⁹ y a la socialización de la propiedad, temas abordados por la Cámara los días 1 y 6. Respecto al primero destacaba el cardenal como "La actitud de los socialistas, favorable al voto de la mujer, fue dirigida a agriar a los radicales, asudiliados por el Sr. Lerroux y cuyo voto a favor de la concordia religiosa es indispensable para alcanzarla"; como consecuencia de tal actitud se había producido entre los radicales "pública destemplanza y revuelo hacia el extremismo aun en la cuestión religiosa, actitud que sin gran esmero pudo de momento ser aplazada." Sobre el incidente habido en la discusión del artículo relativo a la propiedad interpretaba VIDAL que lo que se había pretendido era ir a "inutilizar al Presidente del Gobierno para su anunciada intervención moderadora en el problema religioso",

el tema, de la que ya hemos hecho mención en la nota b del capítulo "La Iglesia ante la República". Solo queremos destacar aquí, entre las obras citadas, la aportación de M^a Dolores GÓMEZ MOLLEDA al señalar la actuación discordante en un arco de posturas moderadas y extremistas- de los diputados pertenecientes a la masonería en los debates de la cuestión religiosa, de acuerdo con su pertenencia a las diversas logias regionales, GÓMEZ MOLLEDA, M^a Dolores *La Masonería en la crisis española del Siglo XX*, Madrid, 1986, págs. 313-392.

La cautelosa opinión del cardenal sobre este tema sería sustituida, no obstante, por otra más contundente al referirse a los ataques a la Compañía de Jesús por parte de la masonería en la carta enviada a PACELLI el día 16, a la que más adelante aludiremos. Sobre esta concreta cuestión y la final aceptación de la fórmula transaccional de AZANA ver también GÓMEZ MOLLEDA, M^a Dolores, *Op. cit.*, págs. 357-392.

¹⁵⁹) Aparte de ser obligado citar en este punto la obra de Rosa M^a CAPEL *El sufragio femenino en la segunda República española*, Granada, 1975, es interesante recoger aquí la propia visión eclesial de lo sucedido en la cámara, visión que tenemos de primera mano gracias al informe realizado por el sacerdote diputado Ricardo GÓMEZ PUJOL, que figura en el archivo del cardenal VIDAL; BARRAQUER y al que GÓMEZ MOLLEDA también se refiere en su obra citada. En este

toda vez que se había protestado por utilizar su ascendiente al intervenir, antes de la votación, exponiendo su parecer contrario al artículo, protesta que, al ser asumida, en cierta forma, por la comisión dictaminadora tuvo el efecto de que ALCALÁ ZAMORA abandonara ruidosamente el banco azul, al que sólo se le consiguió hacer regresar tras una serie de ruegos y explicaciones.

informe, aunque referido principalmente al tema indicado, también hay interesantes alusiones a la reacción que produjo entre los diputados la noticia de la dimisión del cardenal SEGURA, anunciada por ALCALÁ ZAMORA el mismo día del debate del voto femenino, reacción que, según los "izquierdistas más encarnizados", no tenía valor alguno, opinión que no dejaba de ser plenamente acertada, como destaca el autor mencionado, toda vez que presuponian que la dimisión "en vísperas de discutirse la cuestión religiosa, era síntoma de que se la trae como precio de concesiones a favor de la Iglesia." ARBELLOA también pone de relieve la opinión del sacerdote respecto a que la derrota de los radicales en su oposición a la concesión del voto a la mujer fue motivo de que su entorno, en lugar de volverse contra los victoriosos socialistas, se centrara en atacar a la Iglesia como medio de debilitar su hipotética y discutida influencia sobre las mujeres españolas. Concluyendo, por tanto, pese a todos los esfuerzos de la jerarquía por ganarse a los diputados de este partido, en apoyar el proyecto tal como había sido presentado por la comisión. Ver ARBELLOA, Víctor Manuel, op. cit., págs. 46-53 y *Iglesia y Esclat durant la segona...*, págs. 348-350. Reproducimos el informe de GÓMEZ RUIZ en el apéndice número 7.

Respecto a la reacción contra la Iglesia provocada en los partidarios de LERROUX con motivo de la concesión del voto a la mujer, hizo MARRARON unas interesantes declaraciones a "El Sol", publicadas bajo el titular *Don Gregorio Marrarón no cree que se deba ir a la expulsión de las órdenes religiosas*. En ellas, tras expresar sus ideas progresistas sobre la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, etc. se declaraba opuesto a tal expulsión por las razones que expresaba (protestas y descontento, desaparición del favor oficial de que gozaban si pasaban a quedar sonetadas a una ley común y problemas que, en orden a la asistencia pública, podría crear su desaparición) añadiendo que no había razón para responder a la concesión del voto a la mujer con la expulsión de las órdenes, toda vez que había muchas mujeres que no se confesaban desde el día de la boda, otras que sólo veían en el confesor al sacerdote que las absolvía, y si bien existían las fanáticas y beatas, la "especie de histerismo religioso" que representaban estaba llamado a desaparecer por estar reñido "con el espíritu libre de la mujer moderna, que estudia y se instruye, y que, por tener criterio propio, no puede someterse ciega al ajeno". Destacando la actitud transigente del Vaticano, MARRARON concluía pensando, al igual que la jerarquía, que en la decisión final era decisiva la actitud de LERROUX y su partido.

A la vista de este conato de crisis ministerial el cardenal VIDAL, tal como explicaba a FACELLI, tomando situación "ante el peligro que eso implicaba", quiso "sostener el animo del Presidente contra todos los ardides que pudieran sobrevenir", para lo cual le envió una enfática carta en la que, tras describirle como "el gran sacrificado para el bien de la cosa publica como aliento y vida de ella", le queria transmitir que "en el fondo de los incidentes presentes palpita la cuestion religiosa, que espíritus mezquinos quisieran no dejar encauzar por vías de concordia aunque sea con amenazas en la calle o emboscadas en el Parlamento" y que sin la solución armonica de esta cuestión, como el muy bien sabia, "no hay paz para la Republica, ni será posible la colaboración cordial de todos los ciudadanos," razon por la que le estimulaba a continuar con la ardua labor emprendida. (160)

La alusión a determinadas amenazas en la calle que hacia el arzobispo en su carta al presidente tenia su fundamento en que, como seguía narrando al Secretario de Estado vaticano, al tiempo que tenian lugar los incidentes que habia descrito, "inicióse por parte de socialistas y radicales-socialistas la táctica de preparar manifestaciones tumultuosas en toda España, a fin de amedrentar al Gobierno

(160) *Esglesia i Estat durant la segona...*, págs. 353-354. A esta carta contestó brevemente ALCALA ZAMORA el día siguiente expresando también su creencia de que la maniobra "tenia puesta la cara en el problema que se avecina" y añadiendo que consideraba que toda prudencia seria poca en las intervenciones, pues "aunque la reflexión parece restablecerse, me es imposible aún predecir lo que puede pasar, si bien el ambiente se despeja, salvo en torno a lo que adverti como mayor dificultad", frase esta última que parece encerrar una alusión a la disolución de los órdenes religiosos y especialmente a la situación de la Compañía de Jesús. VIDAL remitía copia de ambas cartas en los anexos de su despacho a FACELLI.

y coaccionar al Parlamento en favor del proyecto sectario en discusion", "lo que le había llevado a escribir tanto al ministro de Justicia como al de Instrucción Pública, a fin de moverlos a la contención de estos peligros, que incluían la amenaza de una nueva quema de conventos, con el propósito de facilitar la votación favorable a la expulsión de las ordenes religiosas y, especialmente, de la Compañía de Jesús. En ambas cartas aludía el cardenal a las actuaciones que se daban en la calle para influir en el parlamento y al intento de desvirtuar en él la autoridad del presidente, como estrategia para impedir una armonica solución de la cuestión religiosa; en ambas, también, hacía votos para que tendieran, con todo su esfuerzo y autoridad, a que se alcanzara dicha solución."

Junto a las aludidas actuaciones parlamentarias y extraparlamentarias, también informaba el cardenal que se habían notado "entre los partidos republicanos más numerosos de la Cámara corrientes de aproximación hacia una fórmula menos radical que el dictamen", la cual, no obstante, era "inadmisible como fórmula de verdadera concordia, principalmente porque en ella se establece la facultad de disolver ordenes religiosas por ley especial", según el texto de la enmienda presentada por un grupo de diputados de Acción Republicana y favorablemente acogida por la mayoría

(161) Como ejemplo de la actuación de los grupos que querían que prosperara el texto del proyecto preparado por la comisión dictaminadora, cita ARBELLOA al de mujeres que hizo entrega a la puerta de las Cortes de la hoja impresa a que nos hemos referido en el epígrafe anterior, Víctor Manuel ARBELLOA, op. cit., pág. 86, nota 56, Sobre manifestaciones en la calle durante el debate de la constitución ver la nota 174 de este capítulo.

(162) *Església i Estat durant la segona*, I, págs. 354-356

de la Cámara. (162)

La noticia de este hecho, que el arzobispo calificaba de "alarmante", había coincidido, precisamente, con la entrevista mantenida por él con Alejandro LERROUX, que el día 5 había regresado de Ginebra. Esta entrevista, que consideraba "importantísima", era resumida por VIDAL en los siguientes términos:

"a) decisión suya y del partido de colaborar con sus votos a la fórmula de concordia más favorable que se pueda obtener, confesándose, sin embargo, que en la reunión de su minoría había tenido él que actuar como dictador para contener el extremismo de una parte de sus correligionarios;

"b) criterio suyo absolutamente contrario a toda medida persecutoria;

"c) confirmación de que las corrientes en los partidos republicanos más numerosos se encaminaban ciertamente a fórmulas como la mencionada de Acción Republicana, que, según su juicio, podrían ser instrumento persecutorio en manos de un Gobierno sectario, como podrían servir incluso para concertar un Concordato con la Santa Sede, si el ejecutor fuese un Gobierno moderado;

"d) absoluta claridad y decisión respecto al futuro político, por parte del Sr. Lerroux, de que él y su partido en el poder, a pesar de su

(163) "El Sol", 8 de octubre de 1931. Ver en el apéndice número 8 el texto de la enmienda, que propiciaba la consideración de la Iglesia como corporación de derecho público y el favorable comentario del periódico.

Ya hemos indicado en la nota 10 de este capítulo que esta era, precisamente, la fórmula que había acuñado la comisión redactora del anteproyecto de constitución y las razones por las que, a juicio de José Manuel CASTELLIS, tal fórmula no prosperó, razones de las que es fácil deducir el parecer contrario del cardenal VIDAL a ella, pese a que entendiera se trataba de una fórmula de concordia.

A pesar de ya recogerlos que el citado autor destaca cómo la posibilidad de considerar a la Iglesia como Corporación de derecho público tampoco era grata para los republicanos, los verdaderamente deseosos de llegar a un entendimiento

ideario laico, seguirían una política de concordato y de conciliación, dadas las circunstancias actuales de España y la fuerza de la Iglesia en ella."

La gravedad del momento, revelada por la favorable acogida de la enmienda del grupo de AZAÑA, había parecido de tal índole a los metropolitanos, seguía narrando VIDAL, que, "para salvar toda responsabilidad e intentar una enérgica revulsión contra estas tendencias de concesiones mínimas", el día ocho habían acordado dirigir al presidente un "extenso documento".⁽¹⁶⁴⁾ Dicho escrito, firmado

con el estamento eclesiástico -y buena prueba de ello es la enmienda a que acabamos de aludir- no dudaban en defenderla. Un eximio adalid de tal fórmula sería, precisamente, José ORTEGA Y GASSET que ya en su intervención en el Congreso el 4 de septiembre había propugnado esta posible solución de concordia.

(164) Aunque el cardenal no diera cuenta de ello en su despacho al Secretario de Estado vaticano, el mismo objetivo había tenido la carta que enviara a MAURA el día 10 y en la que, tras expresarle su conformidad en el aplazamiento de una entrevista que tenían concertada, dadas las gestiones que estaba efectuando cerca de ministros y diputados, también le indicaba su deseo de no dilatar el expresarle su "complacencia y agradecimiento por el interés de V., que me consta, a fin de salvar de toda posible acometida las Casas Religiosas y de no permitir que desde la calle se intente imponer al Parlamento una decisión persecutoria."

"Pero más que todo ello, me complace el estado de espíritu, ecuaníme, enérgico y superior a todo falso respeto humano, con que no me parece exagerado imaginar la actitud de V. frente al problema religioso. No he de ocultarle, Sr. Ministro, que en estos momentos de acuerdos trascendentales para el porvenir de España y de la Iglesia, temo más que los criterios o las pasiones hostiles, la endebles de caracteres. Por difícil que sea la situación parlamentaria, yo creo que con decisión no habría de ser imposible el triunfo de una fórmula prudente y comprensiva de conciliación. La Iglesia ha dado pruebas asaz convincentes de no ser obstáculo para ello, según V. no ignora. Y apareciendo tan bien preparados los ánimos en la mayor y más sana parte del país, ¿no sabrá el Parlamento aprovecharlo para asegurar la paz espiritual, y no querrá recompensar así lo que ha significado el prestigio y los sacrificios de católicos como V. y el Sr. Presidente al servicio del régimen? A pesar de las graves dificultades del momento, no me abandona la esperanza de que todavía Vds. con un gesto decisivo puedan impedir que conste en la Constitución algún

unicamente por el cardenal de Tarragona, no era más que una nueva presión que los arzobispos efectuaban para forzar la actuación parlamentaria más favorable a la Iglesia.***La respuesta había sido inmediata y en la entrevista mantenida por VIDAL con ALCALA ZAMORA a consecuencia de ella, éste había confirmado su lealtad respecto a los compromisos contraídos de acuerdo con la "nota reservada", insistiendo aquella misma tarde cerca de diversos ministros para asegurar su colaboración, "y que de todas maneras, cualesquiera que fuesen los acontecimientos, el Presidente se jugaría todo su prestigio y posición para la defensa religiosa."

Ese mismo día ocho se había iniciado el debate de la totalidad de la cuestión religiosa, dedicándole cuatro

principio persecutorio o se cierre la puerta a futuros tratos amistosos con la iglesia." *Esglesia i Estat durant la segona...*, i, págs. 363-365. Sobre el proyecto de MAURA de presentar una enmienda para reducir al mínimo la disolución de las órdenes religiosas, aún sacrificando para ello a la Compañía de Jesús, ver la nota 4 de las págs. citadas y ARBELLOA, Victor Manuel, op. cit. págs. 163-167.

- (165) El escrito del cardenal exponía al presidente los términos de la situación tal como la entendían los metropolitanos. Comenzaba narrando las gestiones efectuadas por el nuncio, el arzobispo de Sevilla y él mismo "para facilitar generosamente por nuestra parte todos los caminos a una concordia prudente y equitativa, según las presentes circunstancias permitían alcanzarla como límite transaccional para todos, sin lesionar los intereses esenciales de la Iglesia y de sus instituciones", habiendo procurado, al tiempo, allegar la necesaria información sobre las tendencias que se daban en el parlamento y fuera de él; de todo lo cual sacaba las conclusiones que exponía sobre lo que había esperar de la votación relativa a la cuestión religiosa.

Tanto por los ministros como por los miembros del parlamento que representaban el criterio de la concordia había escuchado "seguridades de buena voluntad para influir a los respectivos correligionarios hacia la moderación y el acuerdo amistoso con la Iglesia, con la sola advertencia de un peligro muy serio para la Compañía de Jesús"; del conjunto de esas impresiones, los metropolitanos habían alcanzado la seguridad de que tanto el gobierno como el parlamento "cumplirían satisfactoriamente con su deber de equidad, y la Iglesia y sus instituciones serían tratadas de una manera a lo menos correcta y digna..." Sin embargo, al llegar el momento de concretarse el texto transaccional "por informaciones públicas y privadas me entero de que la fórmula que parece va a triunfar, no responde a las promesas y seguridades que se habían dado y a los compromisos contraídos, muy especialmente en lo que se refiere al procedimiento

sesiones, y en el habian hablado veintiocho oradores, fijándose las posiciones de los distintos sectores de la

concordatario para la regulación de relaciones entre la Iglesia y el Estado, al presupuesto eclesiástico y a las ordenes y congregaciones religiosas", razón por la que ahora se permitia recordarle los términos de dichos compromisos segun la "nota reservada".

En la enmienda que parecia estar en trámite, parecia excluido el procedimiento concordatario para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, "y se le somete por modo unilateral a un Estatuto dependiente de la voluntad del Parlamento; se establece prohibición constitucional de subvención para fines religiosos, sin que en cambio se dejen salvados los derechos en justicia adquiridos, aun por los actuales partícipes del presupuesto eclesiástico; y, finalmente, el respeto a las congregaciones religiosas se convierte en un principio arbitrario de disolución o en la sujeción a una ley especial que puede ser una fórmula persecutoria disimulada". de ahí que, tras esta enumeración, el cardenal concluyera afirmando que "De acontecer lo mismo con la fórmula de la libertad de enseñanza, habrían resultado desatendidos todos los puntos contenidos en las garantías repetidamente mencionadas."

Por ello se sentia en el deber de apelar a él para que considerara la gravedad de la situación "si no se vuelve con paso firme y absoluta decision a lo que habia sido hasta ahora el cauce natural por que habia de llegarse a la fórmula equitativa, objeto de las conversaciones y compromisos a que antes he aludido". No desconfiaba en la buena voluntad de ALCALA ZAMORA respecto a la defensa de los puntos acordados, ni tenia motivos para creer que los ministros con quienes se habia tratado hicieran otra cosa, pero lo que afirmaba es que desconfiaba "por un lado, que haya aparecido o se haya gestionado fórmula alguna completamente expresiva de lo que ha sido objeto de las negociaciones entre el Gobierno y la Santa Sede, y, por otro, es publico que los grupos parlamentarios afectos a los Ministros más representativos del espíritu de conciliación en el seno del Gobierno están gestionando la coincidencia en torno de una fórmula no satisfactoria, y, en lo principal, divergente de la esperada". Su impresión, en definitiva, era que "de no producirse un viraje radical en el estado presente de cosas, va a salir de las Constituyentes un texto de intencionada vaguedad que, segun sea el Ministerio, o bien se convertirá en instrumento persecutorio, o en medio de conciliación para con la Iglesia, o bien demasiado explícito en algun punto para que le sea adverso de una manera constante. Temo que, en definitiva, la fórmula de conciliación, de que tanto se ha hablado, tenga en el caso mas favorable el valor negativo de suavizar unicamente el radicalismo sectario del proyecto constitucional. Por tanto, en cualquiera de las anteriores soluciones, resultaria siempre desacuerdo y defeción con respecto a la fórmula conciliatoria garantizada durante el curso de las repetidamente mencionadas negociaciones entre el Gobierno y la Santa Sede."

Contra la Iglesia, no obstante, no seria posible lanzar acusación alguna "en el sentido de que no haya tenido toda suerte de consideraciones al regimen y al Gobierno y de que no haya hecho los más grandes sacrificios para llegar al acuerdo amistoso" y, así, el cardenal recordaba, una por una, todas las reacciones ante los distintos hechos (reconocimiento del nuevo regimen e instrucciones sobre su acatamiento, prudencia en la reacción ante los intentos del mes de mayo y ante las disposiciones modificatorias del "statu quo"

cámara. La impresión que el cardenal trasladaba sobre la mayoría de estas intervenciones era de singular descalificación, indicando que eran "verdadero exponente de la inferioridad intelectual, moral y política de muchas de las fracciones del Parlamento, en las cuales domina la pasión sectaria sobre todo razonamiento de tolerancia y de

político-religioso y reacción ante la petición de la remoción del primado encontrando una fórmula "para que el Gobierno pudiera sentir robustecida su autoridad en la Cámara a fin de inclinarla a la conciliación"), por todo ello "la Santa Sede, ante un texto constitucional no satisfactorio, tendrá derecho a creerse desconsiderada y aun decepcionada en las garantías que le fueron ofrecidas con probabilidades de éxito equivalentes a una seguridad moral, mucho más si no pudiese probarse que se han intentado todos los medios para hacer honor a las negociaciones seguidas." En el plano de la dignidad internacional en que tales tratos estaban situados "sólo una fuerza mayor, no presumida, sino real y objetivamente demostrable," podía excusar el cumplimiento o el fracaso de las seguridades dadas.

Respecto a la Compañía de Jesús, "cuya expulsión o disolución veo que muy generalmente se va dando por segura", quería apelar también al gobierno para rogar "que tal iniquidad no se consuma", haciendo sentir que ello representaría "una violación de derechos, una ofensa a la Iglesia, una ingratitud del pueblo español y un daño enorme para la paz civil de la República," atentándose "a las normas del derecho internacional público declaradas derecho positivo español, se violarían las garantías individuales y políticas proclamadas ya en la Constitución, que se derivan de la libertad de asociación, de la igualdad de todos los españoles ante la ley y del derecho elemental de no ser nadie castigado sin ser oído, ni sentenciado sin previa y probada formación de causa, conforme a los trámites legales", puntos que el cardenal desarrollaba, destacando cómo no se había hecho llegar a la Iglesia "ninguna queja o inculpación probada, ni [se] ha intentado la solución amigable de dificultades, extralimitaciones o abusos, si los hubiere", por lo que la ofensa se agravaba ante la dificultad de defender a la Compañía, protegerla o corregirla, si fuera necesario, insistiendo en la labor desarrollada por los jesuitas en el orden cultural y social y destacando el daño a sufrir por la República, no sólo por la desatención resultante en las obras que dirigían sino también por la reacción contraria a la Constitución que, si tal medida se adoptaba, había esperar de los católicos españoles.

El cardenal dulcificaba al final su escrito insistiendo en que le constaba la buena disposición de su destinatario, pero también en la necesidad de que el gobierno hiciera valer su autoridad en el parlamento para alcanzar la ansiada fórmula conciliatoria. Una vez expuestos todos sus argumentos, concluía señalando: "cumplido el deber de Prelado y de patriota, en nombre mío y representación de mis hermanos de la Comisión de Metropolitanos, he de considerar salvaguardadas todas nuestras responsabilidades ante V.E., como Jefe del Gobierno, y ante la Santa Sede, a cuyo conocimiento he de elevar esta nueva

conveniencia aun patriótica."... Según VIDAL los únicos discursos dignos de consideración habían sido los pronunciados por el ministro de Justicia, por GIL ROBLES, por Amadeo HURTADO... y por el mismo ALCALÁ ZAMORA, que había mantenido en sus palabras los compromisos contraídos con la Iglesia, "a pesar de algunos errores en los

tentativa para que no se vean frustradas las esperanzas y seguridades dadas por el Gobierno para la consecución de una fórmula conciliatoria constitucional." *Església i Estat durant la segona...*, I, pags. 357-363.

- (166) Esta opinión del cardenal sobre gran parte de la cámara no deja de contrastar, como anteriormente hemos indicado al referirnos al informe del Dr. CARRERAS, con la mantenida por ALCALÁ ZAMORA, que en la carta que enviara a VIDAL el 6 de agosto le indicaba que era "la mejor elegida que ha tenido España." También contrasta con la del doctor MARRADON, que en un artículo publicado en "El Sol" bajo el título "El problema religioso: La sugestión del mito", hablaba de "esta Asamblea recia, juvenil, a veces incorrecta, sensible y patriótica siempre, limpia, aun para sus más encarnizados enemigos, de la sombra más tenue de ese interés material y mezquino que ha convertido en agencia de negocios a casi todos los Parlamentos del mundo." Seguidamente resaltaba el ilustre pensador que, pese a sus anteriores palabras, en aquellos momentos pesaba sobre los diputados "un mito alucinante, parásito y terrible de la psicología nacional, que ha chupado ríos de nuestra sangre y de nuestra energía moral y monetaria". Tal mito no era otro que el del clericalismo-anticlericalismo y la creencia de gran parte de los españoles en lo excesivo del poder del clero frente a la de otra mayoría que creía que, sin él, España sucumbiría. Frente a tales posturas MARRADON deseaba ver a sus conciudadanos convertidos en un pueblo tolerante, abierto y respetuoso, para lo cual preciso era que supieran asumir el auténtico concepto de libertad, olvidando rencores consuetudinarios. La República había alcanzado en poco tiempo logros hasta hacía poco impensables: la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de cultos, la sujeción de las órdenes religiosas a un régimen, las trabas a su auge económico, la posibilidad de que fueran sancionadas si iban contra la República, hasta se había logrado la expulsión de un cardenal... Por ello no había necesidad alguna de manchar esos triunfos con una persecución arbitraria que heriría el amor a la libertad y que minaría "en su misma raíz la estabilidad y la autoridad del Estado." Controladas las órdenes religiosas por el poder civil perdían toda su influencia material, la espiritual, que era legítima, no podía atacarse sin cometer un pecado gravísimo y además estúpido. Sería, pues, un gran error que el parlamento obrara bajo la sugestión del mito del clericalismo-anticlericalismo y no en nombre de la razón y de la libertad. "El Sol", 13 de octubre de 1931.

- (167) Según lo define el propio VIDAL, HURTADO era un "diputado catalán, católico, reputado jurista y político". La amistad que le unía a él hizo que disputara entre aquellos parlamentarios en que la jerarquía contó en el planteamiento de intervenciones conciliatorias. Ver AMBELOR, Víctor Manuel, op. cit., pags. 102; 140; 170-173; 201-202; 218-219; 268; 272; 280 y 283.

principios de gobierno", "66" pero defendiendo la fórmula de paz concertada, por lo que había merecido la felicitación de los metropolitanos. "66" De los tres últimos discursos debía recogerse, según el cardenal, "la coincidencia en la apreciación y la actitud de que un acuerdo sectorial del Parlamento significaría la división espiritual de los españoles, la exclusión de los católicos con respecto a la colaboración pacífica en la vida de la República, y el comienzo de un nuevo período constituyente, del cual ALCALA ZAMORA, por un lado y GIL ROBLES por otro anuncian que serán los portavoces en una lucha legal, constante y organizada en todos los ordenes." A pesar de que estos discursos podían haber conducido a la ansiada fórmula transaccional, no parecía que fuese este el resultado. Para ello había faltado el apoyo del partido radical con el que, sin embargo, la jerarquía contaba dadas las palabras intercambiadas con LERROUX en las entrevistas mantenidas. No obstante, en el último encuentro del cardenal con el ministro de Estado aquel había resultado verdaderamente alarmado, y la consecuencia de esta alarma había sido, precisamente, la carta dirigida a ALCALA ZAMORA el día ocho ya que, como el mismo VIDAL expresaba refiriéndose al ministro, "descubrí

(168) Sin duda VIDAL se refería a la convicción de ALCALA ZAMORA de la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado, punto que no era admitido por la Iglesia y que había quedado ampliamente expuesto tanto en el mensaje elevado por la provincia eclesiástica tarraconense a las Cortes constituyentes como en el documento colectivo de 25 de julio de 1931.

(169) En efecto, el mismo día en que figura fechada la carta al cardenal FACELLI, los cardenales ILUNDAIN y VIDAL se habían dirigido al presidente del gobierno en los siguientes términos:

"Hemos leído con gusto el hermoso y elocuente discurso de V.E. pronunciado ayer en la Cámara en brillante defensa de los católicos y de una fórmula de concordia en la cuestión religiosa.

"Aunque se hará V.E. perfecto cargo de que no podemos compartir ninguno de los principios y métodos de gobierno en el mismo propugnados, comprendemos el sacrificio que supone aquella defensa y la lealtad y emoción que revela: por

claramente el interes politico de aquél en reservarse el papel de pacificador en lo futuro y no exponerse ahora a chocar con el radicalismo de las extremas izquierdas, enemigos políticos suyos."

El arzobispo de Tarragona finalizaba su exposición haciendo al cardenal PACELLI un resumen de la situación en las fechas inminentes de la votación parlamentaria:

"a) es posible todavia alcanzar atenuaciones en el proyecto sectario, confiando en muy probables intervenciones pacificadoras de algunos diputados de gran valer y prestigio en la Republica; b) tales atenuaciones no es de presumir que impidan la sujeción de las Congregaciones a leyes especiales de caracter excepcional, y por ende muy limitativo; c) los más expertos parlamentarios prevén la expulsión de la Compañia; d) lo más favorable a prever es que, si la mayoría sectaria sostiene la disolución de todas las órdenes religiosas, la revulsión consiguiente en las individualidades más nobles y representativas de la Cámara ayudadas por nuestras minorias católicas y simpatizantes, pueda producir una crisis insoluble, único hecho eficaz para imponer el retorno -o la revotación- a una fórmula no preceptivamente persecutoria; e) esta posibilidad depende en parte principal

eso le expresamos nuestro más sentido y cordial agradecimiento.

"Quiera Dios, por intercesión de la Virgen del Pilar, que los elementos de la Cámara y todos sus ilustres compañeros de Gabinete sean justos, comprensivos y patriotas, y llegen al fin, siguiendo las sugestivas insinuaciones de su querido Presidente, a la fórmula anhelada de concordia, que convierta la nueva Constitución en una obra verdaderamente pacificadora, amplia, generosa y sin excepciones injustas. De esta manera se corresponderá a la prudente y sacrificada actitud de los Prelados y todos podremos juntamente colaborar al bien de nuestra querida España."

En relación con esta carta destaca ARBELDA la anotación que figura en el diario de Carreras: "Carta de los dos cardenales a Alcalá, agradeciéndole, no felicitándole". De lo que deduce que fue ILUNDAIN quien puso reparos a la felicitación a la que, sin embargo, alude VIDAL en su información al Secretario de Estado vaticano. ARBELDA, Victor Manuel, op. cit., pag. 203, nota 7. El arzobispo remitiría a Roma tanto copia de esta carta como del discurso de ALCALÁ ZAMORA y de las opiniones y comentarios que había ejercido.

del efecto que entre los Ministros produzca el anuncio claro del Presidente de deshacerse de toda responsabilidad ministerial, lo más tarde, una vez aprobada la Constitución; hasta ahora en el seno del Gobierno sólo dos Ministros, ALBORNOZ, radical-socialista, y PRIETO, socialista, se han declarado enemigos de la concordia; f) la dirección de las actitudes de los católicos parlamentarios está prevista para todas las contingencias y eficacias posibles."

Insistiendo, por último, en la alusión que hacía a la grave amenaza que pesaba sobre la Compañía de Jesús, el cardenal quería significar que la jerarquía española había sostenido un continuo trato con sus miembros, y tanto ella como sus colaboradores habían puesto "especial empeño en dar la batalla bien organizada para el momento en que se discutiera en las Cortes la propuesta de expulsión", estando, además, dispuestos a que, si ello sucediera, "su retorno sea bandera de revisión constitucional en lo porvenir." (170)

Como hemos indicado, la siguiente carta del cardenal VIDAL al Secretario de Estado vaticano, de 16 de octubre, es otro de los interesantes documentos en que el arzobispo de Tarragona nos ha dejado constancia de los acontecimientos

(170) *Església i Estat durant la segona...*, I, págs. 369-377.

Como hemos señalado en el capítulo anterior, ya en el informe que VIDAL enviara al cardenal PACELLI el 27 de junio aludía a cómo los extremistas habían provocado los incendios de mayo "para ver si la chispa prendía y, resultado de ello venía la expulsión de los órdenes Religiosos y la revolución social, política y religiosa". La idea de tal expulsión, centrada esencialmente en la Compañía de Jesús, se había dado, en efecto, casi desde la instauración de la República y, así, el 30 de abril el Ayuntamiento de Gijón había adoptado unánimemente el acuerdo de invitar a las Corporaciones de las capitales de provincia del resto de España a que la solicitaran del gobierno.

Que esta iniciativa iba a encontrar el caído de cultivo apropiado son buena prueba las noticias aparecidas en la prensa a raíz de los incendios de mayo. Así "El Debate" informaba el día 22 de dicho mes del registro policiaco llevado a cabo el día anterior en el también incendiado ICAL y motivado por la denuncia de que allí existía un depósito de armas y subterráneos pasadizos secretos, registro que dio resultado negativo. Más adelante, el 7 de julio, aparecería en este mismo periódico la noticia del regreso, con una improvisada manifestación

de aquellos días, en esta ocasión narrados una vez concluida la que iba a ser indudable derrota parlamentaria de la

"entre aplausos y vitores", de los jesuitas expulsados de Orihuela tras los incendios.

Las actitudes enfrentadas respecto a la Compañía de Jesús -a la que CUENCA TORIBIO califica de "campeona del integrismo peninsular", destacando los estrechos lazos que la unían a la dictadura de PRIMO DE RIVERA (CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Estudios sobre la Iglesia española del siglo XIX*, pág. 114)- eran evidentes. Ante el primer aldabonazo dado por el Ayuntamiento de Gijón VIDAL se apresuró a enviar al presidente de la Generalitat, Francisco MACIÀ, una nota en la que, apoyándose en argumentos catalanistas y tras indicarle su parecer de que la tarea de los municipios era "fer administració, no pas política", le señalaba que por lo que se refería a Cataluña era clara la necesidad, sino de negarse radicalmente, si de aplazar el plantear un tema político-religioso de tal índole, que habría de conmover la conciencia de los fieles, con la consecuencia de deshacer el frente único y la solidaridad necesaria en los momentos de presentar las aspiraciones vindicadas. Siguiendo con otros razonamientos de similar índole acababa indirándole que siendo la expulsión una solución extrema era preciso conocer previamente los motivos o acusaciones que la impulsaban, lo cual venía exigido por "la dignitat de la consciencia catalana, encara indignada pels greuges de que la passada ciutatada feu víctimes a molts dels mes preclars fills de Sant Ignasiu... en la seva fobia contra tot el que fos una reconeguda valor nostrada", opinión que contrasta con el juicio antes apuntado de CUENCA TORIBIO. Apoyándose en estas ideas el cardenal solicitaba a MACIÀ que los ayuntamientos de Cataluña no secundaran iniciativas que "pel sol fet d'esser nascudes en moments d'intens apassionament, cal no precipitar-se en seguirles", pidiéndole que hiciera la oportuna indicación a los alcaldes de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, petición que asimismo haría al presidente de la asamblea de Cataluña, Jaume CARNER.

Como el cardenal indicaba al Secretario de Estado vaticano en el informe antes citado, tanto MACIÀ como CARNER habían hecho todo lo posible, "llegaroo el Sr. Macià a tener un fuerte altercado con el Alcalde de Barcelona, quien no pudo obbligar a alguno de los extremistas de su partido." En Tarragona, sin embargo, las gestiones fueron fructuosas, pues, como decía VIDAL, "si bien no se logró evitar se presentase la indicada moción fué rechazada al ser puesta en votación."

No obstante, la propuesta del Ayuntamiento de Gijón dió sus frutos y no sólo el de Barcelona, sino los de otras muchas corporaciones locales de Cataluña y del resto de España se adhirieron a ella. (*Església i Estat durant la segona...*, págs. 58, nota 2; 59; 86-87 y 11, pág. 280, nota 2. Ramón GARRIGA incide erróneamente en su obra que la intervención de VIDAL hizo que el Ayuntamiento de Barcelona no se adhiriera a esta propuesta. Ver GARRIGA, Ramón, *El Cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977, pág. 157)

No se limitaría el arzobispo de Tarragona a hacer estas gestiones sino que, como también relataba al cardenal PACELLI y según ya hemos expuesto, consideró oportuno dirigirse al presidente del gobierno provisional el 14 de junio expresándole su preocupación no sólo por las distintas normas secularizadoras

actitud favorable a la conciliación de los intereses de la iglesia con los de la naciente República, y con el objeto de explicar ante la Santa Sede cuanto se había hecho para atenuar este resultado.

Contaba así el cardenal la progresiva radicalización de los grupos parlamentarios adversos desde la conclusión del debate de la totalidad, el sábado día diez, hasta el reinicio de las sesiones parlamentarias en la tarde del

dictadas y por la actitud general del gobierno sino también por la relación de las autoridades locales con las congregaciones religiosas: "¿Por qué no evitar que algunos Gobernadores y Alcaldes favorezcan la propaganda injusta contra las beneméritas órdenes religiosas, que tantos servicios han prestado a nuestra patria? No cabe confundir la posible imprudencia de algún individuo de la Orden, que puede corregirse armónicamente, con la Orden misma." (*España / Estat durant la segona...*, I, págs. 70-72)

Los esfuerzos de VIDAL iban a enfrentarse con unas posturas apriorísticas que hacían muy difícil cualquier comprensión de sus palabras por parte del gobierno, que incluso había llegado a decidir, ya en los días de la quema de iglesias y conventos, la expulsión de la Compañía, según una propuesta realizada por Fernando DE LOS RÍOS y que parte del gabinete veía con buenos ojos. Aunque esta postura no llegaría a prosperar en aquellas fechas, determinó que la lucha contra la Orden se convirtiera en un objetivo que perdurara en la mente de algunos ministros y que encontraría fácil apoyo en el artículo 24 del proyecto de constitución, por lo que los jesuitas comenzaron a moverse en Roma e incluso cerca de SEVILLA para intentar salvar su situación. (ARBELDA, Víctor Manuel, *La semana trágica de la Iglesia en España*, págs. 19 y 35)

A pesar de cuantas gestiones harían el nuncio, el cardenal VIDAL y los colaboradores de la comisión de metropolitanos llegaron a redactar una "fórmula general" para defender a la Compañía de Jesús en los debates constitucionales y los mismos jesuitas, que en pleno debate de la cuestión religiosa, se dirigirían el día 12 de octubre con un extenso manifiesto a las Cortes, y a pesar de cuantas voces de la jerarquía se habrían alzado en defensa de las órdenes y congregaciones religiosas y especialmente de la Compañía, y que culminarían con las palabras del documento colectivo de diciembre de 1931, ella sería, según el planteamiento propiciado por AZARA, la víctima propiciatoria en el articulado de la Constitución definitivamente aprobada. En enero de 1932 se dictaría el decreto de su disolución y de confiscación de sus bienes, tema este último que dio lugar a amplios debates en las Cortes a raíz de la interpelación presentada por LAMARLE DE CLAIRAC para que en ellas se discutieran los términos del decreto y que evidenció la existencia de un gran sector de opinión que atribuía a los jesuitas una gran acumulación de riqueza; cuestión importante que influyó en su disolución, propiciada desde el primer momento, según indica RAMÍREZ JIMÉNEZ, por la Masonería y por los capitalistas, si bien muchos de sus miembros continuarían a título privado la labor docente. (RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República española*, págs. 232-240).

martes trece. Las noticias que la jerarquía y sus colaboradores iban recibiendo de la actitud que decantaba a los socialistas, radicales-socialistas y "el pequeño grupo de intelectuales racionalistas", hizo que se aprestaran a formular una enmienda de "máxima transigencia"⁽¹⁷¹⁾ para evitar el resultado que se auguraba, enmienda que, no obstante, no fue finalmente defendida en la Cámara ante el desarrollo de los hechos⁽¹⁷²⁾ y la decisiva intervención de

Por exceder el tratamiento de esta cuestión de los límites de esta tesis, recogemos en el apéndice dedicado a la documentación relativa a las órdenes y congregaciones religiosas los distintos textos citados en esta nota, así como los más relevantes relacionados con la Compañía de Jesús en el periodo que examinamos.

- (171) En el diario que el Dr. CARRERAS llevó los días siete a trece de octubre, al que anteriormente nos hemos referido, figuran detallados todos los contactos que los arzobispos de la comisión mantendrían esos días tanto con los miembros del gobierno, a las que ya hemos aludido, como con los diputados católicos para preparar, con estos últimos, la ofensiva parlamentaria que culminaría con la formulación a que alude el cardinal, *Església i Estat durant la segona* ..., I, págs. 378-383. En la obra citada de ARBELLOA encontramos una transcripción fiable de este diario. Ver págs. 101-103. En la nota 1) de estas páginas el citado autor también alude al texto mecanografiado, sin fecha, existente en el archivo de CARRERAS bajo el título "Plan de acción parlamentaria". Copia de este "Plan" también figura en el archivo del cardinal VIDAL y en él aparecen reflejados los nombres de los distintos diputados que deberían intervenir en defensa de la Iglesia y la estrategia a seguir, con especial mención de la relativa a la defensa de la Compañía de Jesús, *Església i Estat durant la segona*..., I, págs. 366-369. Reproducimos este documento en el apéndice núm. 9.

- (172) A pesar del nulo resultado de esta enmienda VIDAL remitiría su texto como uno de los anexos que acompañaban su carta:

"Enmienda a los artículos 24 y 25.

«Artículo 24. (Aunque figura bajo este epígrafe, se trata en realidad del artículo 25 del anteproyecto y la siguiente sería propiamente la de su artículo 24).

«La libertad de conciencia es inviolable.

«El Estado garantiza en todo el territorio español la libertad de confesión religiosa y el ejercicio privado y público del respectivo culto, sin más limitaciones que las impuestas por la moral y el orden público.

«La condición religiosa del ciudadano no constituye circunstancia modificativa de su personalidad civil y política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República.

AZANA tras la aprobación del artículo tercero ("El Estado no tiene religión oficial") con su histórico discurso que, al decir del cardenal, "con un gesto político certero -visión clara de la realidad parlamentaria, y, a la vez, hábil explotación de la misma hacia el izquierdismo- señaló el camino y fue el lazo de unión de los partidos republicanos

«Ningún ciudadano y especialmente los funcionarios públicos o individuos de institutos armados estarán obligados a formar parte de una confesión religiosa o a participar en un acto o ceremonia de culto, así como no podrán ser compelidos a declarar oficialmente sus creencias, a no ser por motivos exclusivamente estadísticos.

«A ningún ciudadano y en especial a ningún funcionario público o perteneciente a institutos armados, podrá ponerse obstáculo para la profesión de su confesión, práctica del respectivo culto y cumplimiento de sus deberes religiosos.

«El Estado garantiza la asistencia religiosa en el ejército y armada, asilos, hospitales, cárceles y establecimientos públicos análogos.

«Las Iglesias y confesiones religiosas podrán ejercer la libre práctica de su respectivo culto en los cementerios públicos municipales.

«La Iglesia católica y demás confesiones religiosas tienen el derecho de establecer, poseer y administrar, según sus propias leyes y de acuerdo con el derecho común del Estado, cementerios destinados a sepultura de sus respectivos fieles, asimismo la libre práctica de sus ritos y ceremonias en los cementerios públicos municipales.

«Artículo 24.

«Las confesiones religiosas actuarán libremente, en régimen de separación del Estado, como entidades morales, con arreglo a sus características y régimen propios, y podrán admitir y excluir libremente a sus fieles o adeptos sin intervención del poder público. El Estado garantiza la posibilidad de consecución de sus fines religiosos en el territorio español dentro de los límites de la Constitución y de las leyes.

«La Iglesia católica y las confesiones que en lo sucesivo obtuvieren tal declaración por parte del Estado serán consideradas de derecho público con plena personalidad jurídica. Esta declaración implica el reconocimiento de la confesión religiosa, de sus entidades jerárquicas y régimen propio, en cuanto se refiere a la consecución de sus fines peculiares.

«Las órdenes y congregaciones religiosas quedarán sometidas a las leyes generales del Estado, excepto en lo que se refiere a sus fines peculiares y régimen interior.

«Las relaciones que, dentro del régimen de separación, debe sostener la Iglesia católica y sus instituciones con el Estado, así como los derechos de las

hacia una fórmula no tan radical como el dictamen primitivo...⁽¹⁷²⁾ pero que indudablemente no respondía a los esfuerzos desplegados por la jerarquía y por los elementos católicos de la cámara y que vino a decantar definitivamente las posturas que habían de mantenerse a lo largo de la maratónica sesión nocturna del día trece, determinada por BESTEIRO en base a motivos de orden público, "por la agitación provocada en la calle por los partidos interesados".⁽¹⁷³⁾

nismos, serán reguladas por aced de convención con la Santa Sede." *España: Estat durant la segona...*, I, págs. 402-403. El cardenal también incluiría el texto de otra enmienda que debería haber sido defendida por MURRADO. Sobre el proceso seguido por dichas enmiendas ver op. cit., pág. 387, nota 5.

(173) Sobre el discurso de AZARA ver ARBELLOA, Víctor Manuel, op. cit., págs. 254-261.

(174) Antes, durante e inmediatamente después de las fechas en que tuvo lugar la discusión de la cuestión religiosa en las Cortes se celebraron actos y mítines, algunos de ellos acompañados de disturbios, en toda España. A pesar de las palabras del cardenal VIDAL en sus comunicados al Secretario de Estado vaticano de 11 y 16 de octubre, lógicamente y de acuerdo con las instrucciones recibidas por los fieles de sus obispos, no todos estos actos eran contrarios a los intereses de la Iglesia, según las noticias de prensa de la época.

Tenemos así noticia, por ejemplo, del mitin católico celebrado en Zaragoza el día 31 de agosto con gran concurrencia de un público en el que destacaban "buen número de sacerdotes y muchas señoras" y en el que, entre otros conferenciantes, había hablado el canónigo y diputado Santiago GUALLAR. Al final del acto "nutridos grupos de ideas contrarias, obreros en su mayoría" provocaron agresiones teniendo que intervenir las fuerzas de orden público que se verían precisadas a custodiar al diputado, "El Sol", 1 de septiembre de 1931.

El día 1 de septiembre Angel HERRERA pronunciaria una conferencia en San Sebastián en la que condenaria los procedimientos de fuerza y el recurso a las armas -peligro que en aquella época, como hemos indicado en la nota 274 del capítulo "La Iglesia ante la República", radicaba esencialmente en el Norte- para cambiar el panorama político, afirmando en sus palabras, paradójicamente, que una contrarrevolución de tal índole tendría como consecuencia que en España no pudiera instaurarse otro régimen político, "ni siquiera una dictadura", y añadiendo que el proyecto constitucional, de aprobarse en sus propios términos, condenaría al ostracismo a una parte muy considerable de la población, de ahí su confianza en que el Estado respetaría a la Iglesia y que quedarían en España la mayor parte de las órdenes religiosas, "ya que no sería posible que se quedaran todas por la campaña que se está haciendo contra algunas de ellas", clara alusión a la Compañía de Jesús. "El Sol", 1 de septiembre de 1931.

A pesar de tales previsiones, contaba el cardenal, los elementos católicos habían organizado, en un inútil intento de obstrucción, los turnos para la oposición "y para que la opinión pública se diera cuenta de que se habían agotado todos los medios de resistencia antes de triunfar la fórmula sectaria". De esta forma podía afirmar ante el Vaticano "que los católicos han cumplido con su deber, y merecen bien de la Iglesia y de la Patria por el denuesto y elevación de sus actitudes y esfuerzos, para los cuales los Prelados hemos manifestado nuestra complacencia y agradecimiento".

Tras destacar que respecto a los compromisos contraídos con la Iglesia tan solo habían sido fieles ALCALA ZAMORA y MAURA, resaltar el silencio y abstención de LERROUX que, según sus palabras, "no bastan para cohonestar su defección o cobardía, aunque se quiera alegar el hecho de inclinarse su partido radical a la unión con los socialistas y Acción Republicana" e informar de la actuación seguida por el conjunto de la Cámara en la votación final y, en

No cabe duda, no obstante, que los hechos contrarios a la Iglesia -como la aludida actuación en Zaragoza- revestían una mayor virulencia. Así:

El 14 de octubre, recién aprobado el articulado fundamental de la Constitución relativo a la Iglesia, se habían congregado en la Puerta del Sol de Madrid "numerosos grupos de mozalbetes, que daban diversos gritos contra el clero y a favor de los Soviets", interviniendo los guardias de asalto para disolverlos. El mismo día había habido revuelo en San Sebastián por el reparto de unas hojas con versos y un manifiesto de los radicales socialistas, "en términos anticlericales", dirigido a las mujeres, así como una invitación para un mitin en homenaje a Francisco Ferrer, teniendo lugar disturbios frente a la residencia de los jesuitas.

El día anterior se habían repartido octavillas contra el clero en Oviedo formándose una manifestación espontánea que fue disuelta por las fuerzas de orden público, "El Sol", 14 de octubre de 1931.

El 15 de octubre hubo otro alboroto en la Puerta del Sol de Madrid, provocado porque al paso de un tráfico diverso transeúntes se habían metido con él y, mientras unos trataban de defenderlos varios grupos habían lanzado gritos contra el clero, por lo que los guardias de asalto habían tenido que restablecer el orden, "El Sol", 16 de octubre de 1931.

particular, por "los políticos representativos del antiguo régimen y los llamados intelectuales", que no habían intervenido ni votado, se refería VIDAL a la rapidez con que se había tramitado la cuestión religiosa, confirmada por las redacciones sucesivas del articulado⁽¹⁷⁵⁾ hasta llegar a la fórmula definitiva propiciada por la intervención de AZAÑA y que establecía la prohibición de enseñanza a las órdenes religiosas, la inmediata disolución de la Compañía de Jesús con la nacionalización de sus bienes, la prohibición de subvenciones a la Iglesia por parte de municipios, provincias y regiones y la reducción a dos años del plazo para la total extinción del presupuesto eclesiástico.

El 21 de octubre se había celebrado en Montejaque (Málaga) una manifestación anticlerical y en pro de la revolución social autorizada por el alcalde y protagonizada, al parecer, por hijos y allegados de los miembros de la CNT del pueblo. En ella se habían dado vivas a la libertad y a fuera a los jesuitas y a las beatas", "El Sol", 21 de octubre de 1931.

Y, ya en noviembre, se habían producido dos mítines de afirmación laica, uno en Barcelona el día 3 y otro en Alcazar de San Juan el día 14, caracterizándose el primero por la gran concurrencia de público; estaba prevista la intervención de Victoria KENT y de ARAQUISTAIN, pero "el revuelo político producido en Madrid" había impedido su participación, lo que fué causa de vivas protestas por el público; en el mitin se había propugnado la formación de un frente único, el "echarse a la calle para imponer de una manera definitiva el ideal laico para que pueda dársele efectividad jurídica desde el Poder," y condenado "el procedimiento de la Compañía de Jesús como fuerza militante de la Iglesia para abatir el poder liberal", afirmando que se estaba preparando la segunda ciudadura al conspirarse solapadamente contra la República, por lo que el Estado sólo tenía una forma de defenderse que era "agrediendo a los que le combaten", propuesta que no impediría concluir a los participantes señalando que había que dejar "los odios para ellos", "El Sol", 3 y 15 de noviembre de 1931.

Sobre los actos contra la Iglesia y los disturbios provocados ver también los epígrafes 6 del capítulo "La cuestión de la Enseñanza", la nota 15 de la pág. 390 de *Esglesia i Estat durant la segona...* y la op. cit. de Víctor Manuel ARBELDA, págs. 159-160 y 224-227.

(175) Sobre estas redacciones y las posturas de los distintos partidos políticos ver ARBELDA, Víctor Manuel, op. cit. págs. 237-243.

Insistiendo en la situación resultante para la Compañía, tan grata a Roma, quería realizar el cardenal determinadas puntualizaciones ante el Secretario de Estado vaticano:

"El texto aprobado ofrece otra gravedad, que he de señalar, por lo que toca a la redacción hipócrita e irreverente al mismo tiempo, con que se establece la disolución de la Compañía de Jesús, blanco constante de los intentos persecutorios de los partidos revolucionarios y de la oculta dirección de ellos por los elementos racionalistas intelectuales. Me refiero a la bochornosa y ridícula forma de tomar por motivo de disolución el supuesto cuarto voto de obediencia a autoridades distintas a la legítima del Estado. Este título de disolución, por un lado, representará un nuevo atentado jurídico del Gobierno, cuando aquella se ejecute, por la inexistencia de dicho voto en el sentido que se supone..., y por otro, aflige indeciblemente nuestro ánimo por representar un agravio inaudito a la venerada y sagrada autoridad del Augusto Pontífice."

Las consecuencias inmediatas de la aprobación del texto contrario a la Iglesia habían sido la dimisión de ALCALA ZAMORA y de Miguel MAURA y la asunción de la presidencia del gobierno por AZAÑA, "el Ministro de la conjura antirreligiosa y antipresidencial", en palabras del cardenal, crisis que, según él, demostraba la eficacia de las gestiones realizadas.

Otras consecuencias de mayor gravedad y a más largo plazo eran minuciosamente detalladas por VIDAL:

"El efecto del texto persecutorio, en la opinión general, es que divide profundamente a los ciudadanos y crea un cisma espiritual en la República y abre en consecuencia prácticamente un nuevo periodo de revisión constitucional, que solo puede terminar con la anulación legislativa, en plazo más o menos lejano, de los preceptos sectarios aprobados."

Esta impresion habia tenido como resultado determinar la actitud de las minorias parlamentarias defensoras de los intereses de la Iglesia, que habian acordado - desoyendo el consejo de los metropolitanos, que juzgaban que no era conveniente retirarse hasta que en la cámara se discutiera el articulado relativo a la familia y a la ensenanza- abstenerse de colaborar en lo sucesivo en los restantes debates constitucionales, explicando su posicion en un manifiesto dirigido al pais. "A instancia de los prelados se habia conseguido dar una forma mas prudente a estas actitudes, logrando que se constituyera en Madrid una "comision gestora de diputados catolicos, a fin de estar atentos a las conveniencias de nuevas intervenciones exigidas por los intereses de la Iglesia".

Otro de los resultados de la votación era el carácter que configuraba al nuevo gobierno, de "significación marcadamente izquierdista por las causas que han motivado su formacion y por la mision que le compete de ejecutar el precepto constitucional antirreligioso", tal como corroboraban sus primeros acuerdos, entre el que figuraba la anunciada ley sobre las ordenes y congregaciones religiosas. "

"La unica mitigacion que cabria esperar es el convencimiento, que aun algun Ministro ha expresado en la intimidad, de que el texto constitucional es de ejecucion dificil, especialmente en lo que se refiere a la ensenanza de las Congregaciones religiosas,

(176) Victor Manuel ARBELLOA, op. cit., pags. 347-350 y *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 405-407. Ver el apéndice núm. 10.

(177) El proyecto de dicha ley fue aprobado por el Consejo de ministros de 7 de octubre de 1932, leyéndose en el Parlamento el 14 siguiente y comenzando a debatirse el 2 de febrero de 1933. La ley seria aprobada el 17 de mayo de 1933 por 278 votos contra 50 (DS núm. 338, 17 de mayo, pag. 12.908. TURON DE LARA da la cifra de 240 votos contra 34, tomando erróneamente los datos relativos a la votación de la proposición incidental que pedia se declarase suficientemente discutido el artículo 32 del proyecto. Ibid, pag. 12.896 y Manuel TURON DE LARA, *La España del siglo XX*, II, pag. 352). Fue sancionada por el presidente de la Republica el 2 de junio, publicándose en la *Gaceta de Madrid* el día 3. Respecto

dado el atraso e impreparación del Estado en este orden."'' Aunque la tradición española, de muchas leyes en el papel y poca efectividad en los hechos, en otras circunstancias podría hacer confiar en la nulidad práctica del texto aprobado, es evidente que no dejara de existir ahora un periodo, más o menos largo, de radicalismo gubernamental ejecutor de la Constitución, agravado todavía por las arbitrariedades sectarias de las autoridades subalternas, que en todos los regímenes excepcionales han sido en España los más temibles."'' Y, sobre todo, hay que descontar que no habrá lenidad alguna en lo que afecta a la disolución de la Compañía de Jesús, objeto primordial de la persecución antirreligiosa, no exenta de la habitual e íntima inspiración masonica."

Como conclusión de su informe quería resaltar VIDAL que en todo el proceso, no obstante, había destacado "la serenidad y magnanimidad de la Iglesia" para alcanzar una fórmula de concordia, por lo que ahora aparecía "cargada de razón y plenamente justificada en las resoluciones que la Santa Sede... juzgue oportuno tomar en lo futuro."

Finalmente el cardenal daba cuenta al Secretario de Estado Vaticano de los inmediatos acuerdos adoptados por la comisión de metropolitanos relativo el primero a solicitar del nuncio que transmitiera a la Santa Sede su "dolorida y íntima protesta por la ofensa personal hecha al

al contenido de esta norma y la documentación mas relevante que a consecuencia de ella se originó, nos remitimos a lo indicado en las notas 40 y 170 de este capítulo y, por tanto, al apéndice complementario sobre las ordenes y congregaciones religiosas.

(178) Ver el capítulo "La cuestión de la enseñanza".

(179) Sobre lo acertado de esta observación del cardenal, ver lo ya recogido en los epígrafes 10.2. "La jerarquía y el clero" y 11 "La restante actuación genérica de la jerarquía en la andadura inicial de la República", del capítulo "La Iglesia ante la República" y, especialmente, el capítulo "La secularización de cementerios y la cuestión de los enterramientos".

Santo Padre en el texto constitucional, renovando sus disposiciones para todo sacrificio y labor en provecho de la Iglesia y pidiendo indicaciones en que inspirar la conducta futura del Episcopado español", y concerniente al segundo a convocar la conferencia de metropolitanos y redactar un documento colectivo. Para el debido desarrollo de dicha conferencia VIDAL solicitaba del cardenal PACELLI ampliación de los puntos a tratar en la misma, "..." indicando que sería interesante conocer los precedentes de los casos analógicos en que se iba a encontrar la Iglesia en España para la secularización de los cementerios." "..."

(180) El cardenal PACELLI ya había enviado, a través del nuncio, las debidas orientaciones del papa sobre los temas a abordar por la conferencia: "cuestión nuevos sumarios Bula Cruzada, ejecución (?) sobre seminarios, situación Colegio Español y organización católica, Espera también que Conferencia emita protesta contra ofensas hechas a la Iglesia y se pronuncie en favor Ordenes Congregaciones religiosas, incluida Compañía de Jesús." *Iglesia y Estado durante la segunda...* I, pág. 400, nota 67

(181) Op. cit., I, págs. 385-401. Sobre la cuestión relativa a la secularización de cementerios ver más adelante el capítulo "La secularización de cementerios y la cuestión de los enterramientos".

9. La reacción ante la aprobación del articulado constitucional relativo a la cuestión religiosa.

Así como al tratar de la actuación de los católicos ante los debates constitucionales hemos querido hacer especial hincapié en la protagonizada por la jerarquía, tema central de este trabajo,¹¹⁸² igualmente nos referiremos ahora en forma singular a la reacción de esta ante la

(182) No queremos dejar de apuntar aquí, no obstante, la prolija forma en que la prensa de uno y otro signo dió cuenta tanto de tales debates como del resultado habido en ellos, siendonos preciso, una vez más, remitirnos a la obra citada de Víctor Manuel ARBELLOA *La semana trágica de la Iglesia en España*, singularmente a sus páginas 87-91; 93-98; 124-138; 204-214 y 228-234, con independencia de las detalladas referencias en nota a pie de página a lo largo de toda la obra, mas por parecernos que así completamos dos interesantes temas ya tratados no nos resistimos a aludir a diversas publicaciones que, o por exceder de las fechas en que se centra su obra o por no incidir totalmente en el tema en ella tratado, no han sido recogidas por el citado autor. Tales fueron las efectuadas por "El Sol" el 5 de septiembre de 1931, recogiendo la intervención de ORIEGA y GASSET en la Cámara en la que defendió la conveniencia de considerar a la Iglesia católica en los preceptos constitucionales como corporación de derecho público (ver al respecto la nota 10 de este capítulo); el artículo de Francisco DE COSSIO, "Nuestro problema religioso", publicado por el mismo rotativo el 11 de septiembre y en el que el autor, glosando el discurso de defensa de la totalidad del proyecto de constitución realizado por Fernando DE LOS RÍOS, argumentaba sobre la realidad de la naturaleza católica de la cultura española; el editorial publicado por el moderado "Ahora" el 30 de septiembre y en el que, bajo el título "Ante la cuestión religiosa" se abogaba por una constitución tolerante que respetara el sentimiento religioso del país; el también editorial publicado por "El Sol" en igual fecha y en el que, con el título "El debate religioso", se adoptaba una postura similar a la mantenida por "Ahora" y los artículos publicados por "El Sol" el 3 y el 4 de octubre de 1931, en los que, bajo las respectivas firmas de Matilde HUICI y de Miguel de UNAMUNO se defendía el voto de la mujer negando la pretendida influencia eclesiástica que sobre ella tenía la Iglesia, como se había arguido en la Cámara (ver a este respecto lo indicado en la nota 159 de este capítulo). Reproducimos las aludidas publicaciones en los respectivos apéndices. Ver, en igual orden que las hemos enunciado, los apéndices núms. 11; 12; 13; 14; 15 y 16.

aprobacion del articulado relativo a la cuestion religiosa, bien entendido que solo trataremos aqui de las palabras genericas pronunciadas como consecuencia de ello, toda vez que las relativas a temas concretos seran objeto de analisis en los capitulos siguientes.

9.1. La inmediata respuesta del Vaticano y el mensaje de contestación del episcopado español.

Forzoso es comenzar este epigrafe aludiendo al telegrama cursado por el cardenal PACELLI el mismo dia 10 de octubre, esto es, en la fecha en que, como hemos visto, el cardenal VIDAL le habia resumido el resultado final del debate del articulo relativo a la Iglesia y las consecuencias que su formulacion podria entrañar. En este telegrama expresaba el Secretario de Estado vaticano, en nombre del papa, el pesar de la Santa Sede por tal resultado, siendo las palabras pontificias, como cabia esperar, punto de partida, en muchos casos, de la reaccion del episcopado y de sus comentarios a la nueva Constitucion.

"El Padre Santo desea que vuestra senoria ilustrisima, con todos los medios que estan a su alcance, haga saber lo mas pronto posible a los señores Cardenales, Arzobispos, Obispos, Sacerdotes seculares y regulares y a todos los fieles hijos de la Iglesia de España lo siguiente:

«Primero. Que como el ha estado con ellos en estos ultimos tiempos, asi lo esta mas que nunca en estos dias compartiendo con ellos los danos y las penas del momento presente no menos que las amenazas y el peligro del porvenir.

«Segundo. Que con toda energia que su ministerio apostolico requiere emite esta protesta contra las multiples ciencias irrogadas a los sacrosantos

derechos de la Iglesia, que son los derechos de Dios y de las almas.

«Tercero. Que habiendo el en reciente Enciclica, invitado al Episcopado y a los fieles del orbe católico a rogar por las universales necesidades del momento, y proponiéndose asociarse a las comunes plegarias y orar por esta intención el Santo Sacrificio en la Basilica Vaticana el domingo de Cristo Rey, invita también a todos cuantos alcance este mensaje para que se unan entre si y con el en la especial intención de que cese la gran tribulación que aflige a la Iglesia y al pueblo fiel de la amada nación española.

«El Padre Santo confia en que con la ayuda de Dios, y merced al concurso de todas las buenas energias y por las vias justas y legitimas, no solo serán reparados los daños ya padecidos, sino que será conjurado aquel otro que seria el mas grave de todos, esto es, el de ver oscurecerse y apagarse los esplendores de la fe de los padres, unica salvacion de los peligros que tambien en España amenazan al mismo consorcio civil.»

La primera reacción a las sentidas palabras del papa, hechas publicas por TEDESCHINI la tarde del dia 16 de octubre y difundidas por la prensa, fue el acuerdo adoptado por la comision de metropolitano, que, una vez conocido el texto del telegrama, inmediatamente solicitó a todos los obispos su consentimiento para enviar al pontifice un mensaje de agradecimiento de toda la jerarquia española.

Tal mensaje, fechado el 18 de octubre de 1931, lejos de encerrar la contundencia y concision del enviado por el Vaticano, venia hinchado por una larga serie de frases alabando la figura del rector supremo de la Iglesia y reiterando las ya vistas expresiones acerca de la consecucion del orden y paz civil en aquellos pueblos que acatarán los mandamientos religiosos.

Comenzaba así el documento agradeciendo al papa sus palabras y reiterando la adhesion de todo el episcopado y

fieles a su persona, de la que recordaban la constante presencia al lado de todos los católicos españoles; presencia que era suficiente para confortarles en el espíritu de la fe y la realidad sobrenatural de la Iglesia, contra la que no prevalecerían las puertas del infierno.

No querían los obispos causar más amargura al corazón del papa, pero su condición de pastores les impulsaba a indicar los daños y penas que les imponía el momento "para mejor conocimiento del pueblo fiel, que sintiendo el daño, rechazará o evitará con más energía las causas que lo han determinado."

Así resumían los obispos estos daños:

"...la separación completa y radical entre la Iglesia y el Estado, que se ha establecido sin tener para nada en cuenta la gran fuerza social de la Religión católica con evidente injusticia equiparada a las demás confesiones a pesar de que ninguna de estas cuenta apenas con adeptos en nuestro pueblo, lo cual da ocasión a pensar que en España es obra de un sectarismo pernicioso lo que en las demás naciones puede ser exigencia de las circunstancias por la pujanza de las diversas confesiones; las medidas contra las órdenes religiosas, destacándose entre aquellas la disolución de la inclita Compañía de Jesús y la nacionalización de sus bienes; las disposiciones sobre la enseñanza, con las cuales se pretende arrebatarse el alma del niño a la educación de sus padres y la formación de la juventud a la influencia de la Iglesia; el atentado contra la indisolubilidad del matrimonio y por tanto contra el fundamento mismo de la familia mediante la implantación del divorcio, y la anunciada supresión de la dotación del culto y clero quebrantando los solemnes compromisos contrados por el Estado a título de justicia, sin cuyo principio no cabe la prosperidad de los pueblos."

Efectuada esta enumeración de las disposiciones constitucionales querían recalcar los obispos el que consideraban el mayor de los males: "el laicismo en todos

los aspectos y manifestaciones de la vida", que venia a imponer por la fuerza errores hacia siglos refutados, proclamando el ateismo oficial.

Contra todo ello se habia alzado la palabra del pontifice a la que se asociaban todos los prelados, sacerdotes y fieles españoles, resueltos, sin dejar de reconocer los legitimos intereses del Estado, a velar por los derechos de la Iglesia, que eran los de las almas y su destino sobrenatural "que solo es Dios, fuente de toda la libertad, civilizacion y progreso, y hasta de la misma paz, porque escrito esta que la verdad os hará libres y que la paz es el resultado de la justicia que nos proporciona la tranquilidad mediante el orden."

Ante los deseos del papa prometían los obispos unirse en oracion en la cercana festividad de Cristo Rey para impetrar el cese de las tribulaciones que afligian a la Iglesia de España, esperando que todos los catolicos "dejando a un lado las cuestiones secundarias que les dividen, atenderán de modo preferente a la defensa de los altos intereses de la Iglesia", ante la amenaza que se cernia sobre el pueblo español de "que se oscurezcan y apaguen los esplendores de la fe, nervio y alma de la vida española, arrastrando en la catastrofe al mismo consorcio civil."

Finalizaban los prelados su mensaje, exhortando a todos. Jerarquia y autoridades civiles, a estudiar serenamente el documento del papa, por cuanto ellos eran amantes "de la Iglesia y de la Patria, instituciones ambas que tienen por autor al mismo Dios en su orden respectivo, llamadas por ello a funcionar con leyes de coordinacion y

armonia, porque vienen a terminar en el mismo hombre, sujeto de la una y de la otra". (183)

9.2. Los comentarios individuales de la jerarquía: prelados de Lugo (administrador apostólico de Mondoñedo), Ávila, Sevilla, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Palencia, Toledo, Madrid-Alcalá y Vich.

Mas con independencia de esta respuesta colectiva del episcopado, y siguiendo la misma intención de que el pueblo católico español conociera los nuevos agravios inferidos a la Iglesia por la Republica y la actitud de la jerarquía, muchos fueron los prelados que, al publicar el telegrama del papa, se apresuraron a hacer su particular y personal comentario sobre el mismo y sobre la situación de la Iglesia a raíz de la aprobación del articulado de la Constitución que mas directamente le atañía.

Así, podemos indicar que tal hicieron, según los los boletines eclesíasticos consultados, los obispos y arzobispos de Lugo, Ávila, Sevilla, Tarazona y Tudela, Palencia, Toledo, Madrid-Alcalá, Vich y Barcelona, todos los cuales, tras insertar el telegrama pontificio dirigieron sus respectivos pareceres a los fieles.

Si el obispo de Lugo y administrador apostólico de Mondoñedo se limitó a hacer una mera recensión del telegrama vaticano exhortando a todos sus fieles a unirse en oración con el papa especialmente en la festividad de Cristo Rey a

(183) Este mensaje, como el enviado por la Santa Sede, fue reproducido en todos los boletines eclesíasticos. Ambos figuran también en *España y Exil durante la segunda...*, I, págs. 479-483.

celebrar el 25 de octubre, "" mas explicito seria el Dr. PLA Y DENIEL, obispo de Ávila, que no dejaría de reiterar a sus diocesanos la necesidad de tener esperanza y de orar, "pero no para pedir el milagro de la salvacion, lo cual seria tentar a Dios, sino al cumplimiento de nuestros sagrados deberes y al empleo de todas las energias por las vias justas y legítimas". Tras exhortarles a la especial asistencia a la catedral el día de Cristo Rey, donde se celebraria la acostumbrada procesion "si bien este año por los claustros", les invitaba a dar su obolo a la Accion Católica, "hoy mas que nunca necesaria", recordándoles como el Santo Padre tambien acababa de convocar a todos a la ayuda a los obreros que se encontraran en paro forzoso, por lo que les reiteraba la entrega de donativos en las parroquias o en la curia diocesana. ""

Tambien el cardenal ILUNDAIN haria su personal comentario al telegrama, comentario en el que, tras resaltar la forma en que el papa se unia a los dias de dolor que atravesaban los catolicos españoles y la protesta que elevaba, invitaba igualmente a todos a la oracion en el día 25 y a la cooperacion para la reparacion "de los danos ya padecidos y a evitar que se oscurezcan y se apaguen los esplendores de la re de nuestros padres; lo que han de hacer los fieles hijos de la Iglesia, por vias justas y legítimas siempre, como el Papa dice". Acababa sus palabras estableciendo diversos actos de culto a celebrar en la indicada fecha. ""

-
- (184) 19 de octubre de 1931, "Circular comunicando un telegrama del Papa", BOE de Mondoñedo, año 74, 20 de octubre de 1931, núm. 20, págs. 165-166.
- (185) 19 de octubre de 1931, "Documentos episcopales, la voz del Papa", BOE de Avila, año 42, 22 de octubre de 1931, núm. 12, págs. 441-443. Ver sobre la cuestion obrera el epigrafe correspondiente del capitulo "La Iglesia ante la Republica".
- (186) 22 de octubre de 1931, BOE de Sevilla, año 74, 23 de octubre de 1931, núm. 1190, págs. 365-368.

El Dr. GOMA, por su parte, aprovecharía su glosa al telegrama para exhortar a sus fieles a la unidad en torno a la silla de Pedro, sin dejar de invitarles a la oración, "para salvar la católica nación española" y a la protesta contra "las múltiples ofensas inferidas a la Iglesia en nuestra Patria". Precedía a su comentario el texto del telegrama enviado a la nunciatura adhiriéndose a las intenciones del Papa y dando cuenta de la solemnidad con que se había celebrado la fiesta de Cristo Rey en la diócesis. (167)

Al referirse al mensaje pontificio destacaba el obispo de Palencia el fervor con el que ese año, según había recomendado anteriormente "por razón de las circunstancias tan tristes en que los católicos nos hallamos estos días en España", se había celebrado en toda la diócesis la tantas veces aludida festividad del día 25, señalando, tras referirse a las palabras del papa, que "Dios no nos abandonará en esta gran tribulación, antes saldremos de ella muy mejorados, más firmes en la fe, más puros, más despiertos, más solícitos, más fieles cumplidores de nuestros deberes religiosos y cívicos, si en la oración unimos nuestros corazones al corazón de su Vicario en la tierra." (168)

El recién nombrado administrador apostólico de Toledo, Dr. ROCHA PIZARRO, destacaría el interés del papa por sus hijos de España cifrado en los derechos de la Iglesia, los

(167) s.f., BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de octubre de 1931, núm. 894, págs. 777-783.

(168) s.f., "La voz del Vicario de Cristo", BOE de Palencia, año 81, 31 de octubre de 1931, núm. 13, págs. 681-683.

cuales no eran

"... una mera conveniencia ni una utilidad temporal, son derechos estrictísimos y sobre toda ponderación sagrados los que defendemos y en ley de justicia tenemos obligación de mantener los católicos españoles en cuanto este de nuestra parte; su violación no podía pasar sin protesta, y para que lleve esta el valor de la más alta autoridad de la tierra, levanta el Papa su voz de Soberano y de Padre, y por nosotros y con nosotros protesta contra las múltiples ofensas inferidas a los indicados sacratísimos derechos."

Esta actitud del pontífice le había llevado también a ofrecer por España la misa de Cristo Rey, que era el medio más eficaz que tenía "de aplacar a la Divina Justicia y alcanzarnos misericordia", alentando a todos en la confianza de que "con la ayuda de Dios y por el concurso y esfuerzo de todos los buenos, encaminado al mismo santísimo fin, y dentro de las vías justas y legítimas, serán reparados los daños padecidos y conjurado el peligro de otros mayores" para lo cual los fieles, como habían hecho en la festividad de Cristo Rey, debían multiplicar sus oraciones y sacrificios.⁽¹⁸⁹⁾

También el Dr. EIJÓ y GARAY, obispo de Madrid-Alcala querria destacar tanto la unión del papa con el pueblo español como el hecho de que "con la suprema autoridad de su misión, protesta contra las múltiples ofensas inferidas a los sagrados derechos de la Iglesia, que son los derechos de Dios y de las almas", razón por la que oraba por ellos y pedia oraciones a toda la cristiandad, que el día 25 de octubre alzaría sus plegarias en todo el orbe pidiendo por España, "para que cesen las grandes tribulaciones que afligen a la Iglesia y al pueblo fiel de esta a quien el

(189) 27 de octubre de 1931, BOE de Toledo, año 87, 2 de noviembre de 1931, núm. 20, págs. 362-363. A continuación de este documento publicaba el boletín el mensaje de contestación dado por el episcopado español al telegrama del Vaticano.

Papa llama "nuestra bien amada Nación española". Por esta actitud del pontífice necesario era tener esperanza, ya que sus plegarias y las de los hermanos de todo el mundo atraerían las bendiciones del cielo. Por ello los fieles de Madrid deberían sentirse en la festividad de Cristo Rey mas católicos que nunca, rogando por la Iglesia y por España, razan por la que exhortaba a todos los párrocos a efectuar ese día solemnes actos de culto,

"...como desagravio y reparación; como protestación [sic] amorosa de nuestra constante fe; como invocación del socorro divino, para que mediante el despierto y eficaz concurso de todos los buenos creyentes y por vías justas y legales, no solo sean reparados todos los atropellos ya inflingidos, sino que se arraigue y se extienda mas aun la fe en nuestra Patria, para bien de todos, y salgamos de la presente tribulación mas puros, mas firmes, mas fieles, mas benéficos, mas solícitos del bien del prójimo y del bien comun, mas cumplidores de nuestros deberes cristianos y cívicos, que así daremos gloria a Dios y labraremos el bien de España." (190)

El prelado que, con una gran diferencia respecto a los hasta aquí examinados, glosó con mayor detenimiento el mensaje del papa seria el Dr. PERELLÓ Y POU, obispo de Vich, dedicándole una pastoral monográfica. Dicha pastoral tenia como principal proposito invitar a los católicos españoles a la resistencia legal en defensa de los derechos de la Iglesia, tal como el mismo papa les recomendaba. -resistencia que, indicaba, ya habia comenzado- y para reforzar tal invitacion utilizaba el metodo más llamativo, pasando no a analizar en profundidad el articulado de la Constitución, verdadera causa del documento vaticano, a la

(190) 20 de octubre de 1931, "Circular núm. 99", BOE de Madrid-Alcalá, año 46, 15 de noviembre de 1931, núm. 1546, págs. 414-415.

que solo se referia sucintamente, sino a recordar a los fieles todos los danos sufridos hasta el presente, tanto visiblemente, como, eso sí, por alguno de los preceptos constitucionales. Comenzaba así el prelado recordando los incendios de mayo para concluir refiriéndose a la conculcacion de la configuración eclesiastica de las instituciones mas relevantes, que la nueva Norma Suprema pasaba a posibilitar.

Iniciaba, así, su escrito el Dr. PERELLÓ glosando el telegrama del papa, resaltando como este indicaba que compartia los danos y penas que estaba sufriendo el pueblo español, danos y penas que el obispo pasaba seguidamente a interpretar:

"Alude seguramente a los perjuicios materiales irrogados al clero secular y regular y a las virgenes del Señor con la fuerza y saqueo de iglesias y conventos. donde recibian instruccion y consuelo tantas personas necesitadas y tantos niños desvalidos; se refiere a la perdida de la salud de no pocas religiosas y, en algunos casos, hasta de la vida, efecto del susto y malos tratos que recibieron de las turbas desenrenadas al asaltar los conventos, pues se Nos refirió (por poner caso) de dos religiosas sacadas violentamente de su convento que una murio en el tren y la otra al llegar a su casa".

"Comparte igualmente el Padre Santo nuestras penas del momento presente.

"Grandes, muy grandes, son las amarguras que devoran los corazones creyentes en los actuales momentos al ver que el nombre dulcisimo de Jesus no aparece, ni una sola vez, en la Constitution que se elabora, que la Hostia sacrosanta no siempre es respetada en la via pública; que el culto externo está amenazado de muerte por falta de respeto, y el interno en los templos, por falta de recursos; que Jesucristo, Rey de cielos y tierra, va a ser equiparado oficialmente en España a los corrompidos Lutero y Mahoma; que la instruccion de la niñez se ve amenazada por la escuela laica; la familia por el divorcio vincular; la sociedad por un laicismo espantoso."

Recordados de esta forma los males que sufría la Iglesia española pasaba seguidamente el prelado a describir la situación que, a su juicio, vivía la nación, no dudando en calificar de mansos a los católicos frente a la violencia que enarbolaban, para ahogar sus movimientos de reacción, los que no pensaban como ellos:

"Nótanse en España dos ruertes y opuestas corrientes de opinión. Por un lado los enemigos de la Iglesia apelan a medios de violencia para ahogar todo movimiento de reacción, aunque sea ordenado y disciplinado dentro de la ley. Por otro lado los católicos, con el debido respeto a los Poderes constituidos, han iniciado un movimiento de defensa de los derechos de la Iglesia."

Para justificar lo necesario y positivo de tal movimiento y "a fin de evitar tergiversaciones e imputación de intenciones siniestras, que podríamos afirmar con juramento no existen en Nuestro ánimo, pues solo deseamos la salvación de vuestras almas y colaborar por la paz de España", quería el obispo recordar a los fieles lo dicho por el papa en el último párrafo del telegrama, que transcribía literalmente, destacando como de las palabras pontificias se infería

"...que el movimiento de reacción no solo no es contrario a las enseñanzas de la Iglesia, sino que es de gran utilidad (confía el Padre Santo, espera de Dios cosas útiles) y hasta de necesidad (serán reparados los daños ya padecidos, precepto negativo, que obliga semper et pro semper); siempre que se cumplan las condiciones indicadas por Su Santidad Pío XI, a saber: que se haga por vías justas y legítimas y con el doble fin de reparar los daños ya padecidos y de conjurar aquel otro el de ver oscurecerse y apagarse los esplendores de la fe de los padres."

"Esta es la norma que traza el Romano Pontífice, que *deben*" " seguir, sin titubeos ni distinguos."

los verdaderos católicos."

9.3. La resistencia legal de los fieles contra la nueva Constitución.

Al abandonar las Cortes en señal de protesta por la aprobación del artículo sobre la Iglesia, los diputados católicos habían señalado claramente al país su propósito de iniciar, dentro de la ley, el movimiento oportuno tendente a la revisión de una Constitución que, decían, no podían aceptar. movimiento al que invitaban a todos los creyentes y que, como hemos visto, singularmente en las palabras del obispo de Vich, fue favorablemente acogido por la mayoría del episcopado.

(192) 6 de noviembre de 1931. "Alocución pastoral sobre el Mensaje Pontificio a los fieles españoles", BDE de Vich, año 77, 16 de noviembre de 1931, núm. 2085, págs. 564-568.

(193) Ver el apéndice núm. 10. Entre los boletines consultados tan solo el de Palencia, tan pródigo en dar noticias de los distintos acontecimientos, recoge la de la retirada de las Cortes de los diputados católicos, el manifiesto dirigido por estos al país y el inicio de la campaña revisionista, añadiendo que en todas partes se iniciaba también "una espiritual regeneración" a juzgar por la forma en que se incrementaba la asistencia de los fieles a los templos, c.f., "Crónica General.- Un movimiento que se inicia", BDE de Palencia, año 81, 31 de octubre de 1931, núm. 23, págs. 709-710).

Sobre la campaña revisionista destaca TUSELL, cómo la convocatoria de los diputados católicos y la actuación de la prensa consiguieron "movilizar a masas considerables del país por vez primera en la historia de las derechas españolas". No obstante esta movilización tuvo un carácter defensivo, siendo también grave el ataque izquierdista contra ella: "... en buena medida se puede decir que los actos públicos de Acción Nacional o la CEDA tuvieron siempre este mismo carácter defensivo: es decir, de negación de lo afirmado por las izquierdas más que construcción de una solución nueva o diferente". TUSELL, *Javier Historia de la Democracia Cristiana en España*, I, pág. 164. En las págs. 258-260 trata el autor del nulo resultado de la idea de revisión constitucional durante el mandato de la CEDA en 1935.

Junto a este hecho preciso es recordar que a los cinco días de este manifiesto, el gobierno había sometido a la consideración de la Cámara un proyecto de ley de defensa de la República que había sido aprobado el mismo día 20 de octubre. La ley, que se estructuraba en cinco artículos, contemplaba como hecho sancionable "La comisión de actos de violencia contra personas, cosas o propiedad, por motivos religiosos, políticos o sociales, o la incitación a cometerlos."; más grave, a los efectos del momento, era, sin embargo, que también aludiera a la facultad del ministro de la Gobernación para "suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración puede perturbar la paz pública."***

En este clima, pues, se iniciaba la campaña revisionista que, como veremos, no pudo dar los frutos que auguraron los diputados agrarios y vasconavarros. Para el cardenal VIDAL, tales frutos solo podían tener efecto a largo plazo, tal como expresaría en la carta que, como resumen del resultado de los debates constitucionales y traslado de sus personales impresiones ante el inmediato futuro, enviaría al cardenal FACELLI el 22 de octubre, antes de su regreso a Tarragona.

En tal carta describía VIDAL como "los elementos católicos han comenzado la campaña revisionista por diversas ciudades, recogiendo notables adhesiones. También se han sumado a este criterio la Acción Nacional (Madrid) y la Liga Regionalista de Cataluña...". Junto a ello también era preciso destacar la actitud revisionista del ministro

*(94) *Gaceta de Madrid*, 22 de octubre de 1931.

LERROUX, ⁽¹⁹⁵⁾ a pesar de su nula actuación parlamentaria en defensa de los derechos de la Iglesia. Mas el cardenal no dejaba de "creer problemático el éxito de un artículo adicional a la Constitución para suavizar el texto sectario, según hay intención en algunos parlamentarios de proponer a la Cámara", y, mas aun, añadía VIDAL, "los frutos de la campaña revisionista pueden ser importantes y eficaces en un plazo mas largo, si hay perseverancia y recta orientación en ella, no mezclandola en cuestiones políticas de orden secundario." Respecto a la recién promulgada ley de defensa de la Republica el cardenal queria destacar el interes del gobierno en la defensa del orden público, transcribiendo al Vaticano unicamente el positivo punto -muy ligado a los sucesos de mayo- de la posibilidad de sancion de los actos de violencia contra personas, cosas o propiedades por motivos religiosos, políticos o sociales y la incitación a cometerlos. ⁽¹⁹⁶⁾

No todas las posturas respecto al éxito de la campaña revisionista coincidían, empero, con la del cardenal, como va hemos visto manifestado en los escritos de aliento de otros prelados, escritos a los que inmediatamente se sumaría la prensa de derechas.

Así, "El Debate" del 18 de octubre publicaría un editorial dando cuenta del regreso a Bilbao de los diputados

(195) Lerroux, en efecto, había manifestado reiteradamente su idea de templanza y moderación en relación con la Iglesia y, en tal sentido, el cardenal remitía al Vaticano, como uno de los anexos de su carta un artículo de "El Debate" de 13 de octubre recogiendo tales manifestaciones (*Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 404-405).

(196) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pags. 423-428.

En esta carta el cardenal daría igualmente cuenta a la Santa Sede de la calurosa acogida que en la jerarquía y los católicos españoles habían tenido las palabras del papa, señalando que "en los medios oficiales.... el Mensaje pontificio ha sido considerado como justificado en defensa de los derechos de

vasconavarros, editorial que comenzaba elogiando su labor en las constituyentes. Para su llegada se había preparado un entusiasta recibimiento, que, no obstante haberse prohibido por el gobernador toda manifestación, no dejó de acoger calurosamente a los llegados.

Destacaba el editorialista el trato lleno de "groseras violencias con que la Cámara intenta abrumar a las minorías...", así como la desproporción numérica entre las católicas "y las sectarias -casi todas las demás-", lo que hacía que "la lucha y aun la mera resistencia parecen sobrehumanas", lo cual llegaba a su grado sumo si los diputados católicos eran, además, sacerdotes.

Tales padecimientos no habían sido, sin embargo, inútiles, ya que, como señalaba el rotativo:

"La Constitución no es lo que era el proyecto de la Comisión. Se han suavizado aristas, se ha disminuido el alcance de algunos preceptos persecutorios. Por detestable para nosotros que sea el texto constitucional, el dictamen lo era más aun. Sin el tirón hacia la derecha, sin la presión de las minorías vasconavarras y agraria,

la Iglesia y sedante de toda agitación ilegal por no significar hostilidad ni declaración de guerra al régimen en sí mismo."

También aludiría VIDAL a que en la continuación de los debates constitucionales se había "atenuado un poco el radicalismo que era de prever", lo que había sucedido respecto al dictamen primitivo sobre los derechos de la familia y la cuestión del divorcio, así como respecto a la propiedad de las iglesias consideradas monumentos históricos o artísticos.

Se refería, por último, el cardenal a cómo había quedado recogida en la Constitución la cuestión de la enseñanza -de lo que en el capítulo siguiente hablaremos- y a lo impracticable que los propios ministros consideraban su prohibición a las órdenes religiosas, respecto de las que daba breve cuenta de las gestiones que efectuaban en su defensa, finalizando con la referencia a la convocatoria de la próxima conferencia de metropolitanos.

nulo en apariencia, fuerte en realidad, el sectarismo aun habria ido mas lejos. Por debajo, además de los dictérios de las violencias, va ascendiendo el respeto de los mas sensatos..."

Pero el proposito del editorial era, esencialmente, invitar a todos los catolicos a la campaña revisionista; de ahí que comenzara dando cuenta del empuje con que esta se habia iniciado, esencialmente impulsada por los partidos confesionales.

Siendo las noticias de prensa de la época, y singularmente las de "El Debate" las esenciales para conocer la marcha de esta campaña, transcribimos a continuación el resto del editorial:

"... no dude nadie que la reacción católica contra el desafuero sectario ha comenzado ya y crecera día a día..., comienza la reacción de los núcleos de mas viva responsabilidad: en las Universidades. Conocidas son las manifestaciones orales o escritas de los estudiantes de Barcelona, de Sevilla o de Granada, (97) no todas conformes con nuestra propia ideología; pero todas de acuerdo en condenar las arbitrariedades y violencias contra el sentimiento religioso, tradicional en el país.

«Idéntica actividad espiritual adviértese en muchas regiones. En torno de "Diario de Valencia" activase la organización de las fuerzas católicas

(97) Con independencia de lo que sobre la situación universitaria indicamos en el epígrafe 7 del capítulo "La cuestión de la enseñanza", queremos destacar aquí las noticias dadas por "El Sol" relativas a los altercados habidos en Burgos, Bilbao, Zaragoza, y Valencia. El primero habia tenido por causa unos estudiantes universitarios llegados de Valladolid que se habian dedicado a vender "provocativamente" el periódico de derechas "Libertad", lo que habia tenido como consecuencia que un grupo contrario les arrebatara la prensa y le prendiera fuego, intercambiándose golpes y acabando varios jóvenes rompiendo los cristales de la residencia de los jesuitas. El segundo habia sido originado por la huelga de estudiantes católicos y sus manifestaciones, que habian dado lugar a la imposición de diversas multas por el gobernador civil. El tercero lo habia protagonizado la protesta de los estudiantes católicos de la Universidad de Zaragoza, ante la negativa del rector para la celebración de una asamblea en protesta contra el artículo 24 de la Constitución la cual habia sido anteriormente aprobada por el decano de la Facultad de Derecho. El cuarto y último daba cuenta de los golpes intercambiados entre los estudiantes católicos y no católicos de la Universidad de Valencia a causa de un cartel, que los católicos habian roto, aparecido en uno de sus patios; en dicho cartel

de aquellas comarcas, fortalecidas y esperanzadas después de la vigorosa actuación de la Derecha Regional Valenciana en las elecciones últimas. El presidente de la Acción Nacional Asturiana, señor Fernández Ladreda, acaba de publicar un manifiesto, de efectiva resonancia en aquella región. Los agrarios comienzan hoy, con un mitin en Ledesma, su campaña en pro de la revisión constitucional. En Madrid, Acción Nacional ha elegido ayer mismo su nueva Junta de gobierno y se dispone a intensificar su actuación, en contacto con los organismos provinciales a ella adheridos. Los católicos de Madrid y Cataluña nunca como ahora se han sentido espiritualmente juntos. Esta es la realidad indiscutible de la derecha española. En ella, como tantas otras veces, aparece el país vasconavarro como inquebrantable baluarte; sus hombres como esforzada vanguardia. Y tras ellos, toda la España católica." (198)

No todas las versiones de los hechos eran, sin embargo, tan triunfalistas como las del rotativo de Angel HERRERA, como lo demuestra la versión dada de la llegada del diputado LEIZAOLA a San Sebastián que el mismo día diera un diario tan poco sospechoso de partidismo como "El Sol". Describía este periódico el recibimiento caluroso dado, en efecto, a los diputados, en el que se había llegado a sacar a hombros de la estación al diputado. Mas al producirse esta salida, no habían faltado grupos de izquierda dando vítores "a la República, al artículo 24, a la República de trabajadores, a los Soviets, etc. etc", que no dejaron de incrementarse con otros relativos a los jesuitas, al clero y a la religión, hasta que todo se resolvió en una serie de "grupos que se abalanzaban o apaleaban", dando lugar a

se decía "El Espíritu Santo, con su inspiración, debe resolver todos los asuntos." "El problema religioso." Con motivo de la venta de un periódico derechista se producen en Burgo algunos incidentes". "El Sol", 21 de octubre de 1931.

(199) "Unos diputados beneméritos". "El Debate", 18 de octubre de 1931.

varios heridos y a veinte o treinta detenciones.¹⁹⁹

Como quiera que, tal como hemos indicado, fue singularmente "El Debate" el que más dió cuenta, si bien fuera en forma sesgada, de acuerdo con su ideología, de la marcha de la campaña revisionista, pasamos ahora a referirnos a la misma basandonos fundamentalmente en dicho periodico.

Comenzaria así su serie de reseñas sobre el movimiento de reacción señalando que la Junta de Acción Nacional habia acordado organizar una serie de conferencias sobre temas culturales y politicos, la primera de las cuales trataria, precisamente de la "Posición de las derechas ante la revision constitucional", seguida por "El proyecto de Constitución comparado con las Constituciones extranjeras" y "El problema obrero en la Constitución española".²⁰⁰

Seguiria a esta noticia otra dando cuenta de que en Ledesma (Salamanca) se habia celebrado con gran éxito el primer acto de la campaña revisionista, organizado por el bloque agrario y al que habian asistido más de cuatro mil quinientas personas.²⁰¹ Y a esta una más indicando que se intensificaba el movimiento revisionista por Acción Nacional, que habia organizado una conferencia de GIL ROBLES en el local más amplio de Badajoz y cinco mitines en pueblos segovianos para el domingo proximo.²⁰²

(199) "En torno al art. 24.- El Sr. Leizaola, en San Sebastian.- Incidentes, agresiones y detenciones", "El Sol", 18 de octubre de 1931. Sobre estos hechos el editorial mencionado de "El Debate" se habia limitado a indicar que "La iniqua agresión al Sr. Leizaola ha provocado indignadas protestas en diputados de todos los matizes."

(200) "El Debate", 20 de octubre de 1931.

(201) Ibid.

(202) "El Debate", 22 de octubre de 1931.

La siguiente alusión del periódico reseñaría que seguía extendiéndose la campaña revisionista y daría cuenta de los manifiestos dirigidos a sus electores por los diputados agrarios de Toledo y de Cuenca, reiterando la noticia del dirigido a los asturianos por FERNANDEZ LADREDA.⁽²⁰³⁾ Otra más aludiría al acuerdo de la Junta de gobierno de Acción Nacional de activar los trabajos para la campaña revisionista.⁽²⁰⁴⁾ Otra trataría del mitin revisionista celebrado en Barcelona y en el que habían intervenido el vasconavarro AGUIRRE y el agrario GIL ROBLES exponiendo la posición de las derechas.⁽²⁰⁵⁾ Trataría la siguiente del acuerdo de la Junta de alcaldes vasconavarros sobre la participación de los diputados en la campaña por toda España y de la celebración de diversos actos en las capitales de las cuatro provincias.⁽²⁰⁶⁾

La noticia culminante, por fin, sería la del mitin revisionista celebrado en Palencia, presidido por diputados de Alava, Burgos, Cuenca, Guipúzcoa, Navarra, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Toledo, Tenerife, Valladolid y Zaragoza y al que habían asistido más de veintidós mil personas que habían reirrendado "con delirante entusiasmo" la conducta de la minoría católica.⁽²⁰⁷⁾

(203) "El Debate", 23 de octubre de 1931.

(204) "El Debate", 30 de octubre de 1931.

(205) "El Debate", 1 de noviembre de 1931.

(206) "El Debate", 5 de noviembre de 1931.

(207) "El Debate", 12 de noviembre de 1931. BATLLORI y ARBELLOA señalan que esta concentración, respecto a la que dan la cifra de 25.000 personas celebrada el día 8 de noviembre, fue la más famosa de todas, aunque dió lugar a algunos incidentes. *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, pág. 424, nota. 6. La destacada relevancia de este encuentro hizo que el boletín eclesiástico de la diócesis lo reseñara especialmente señalando que todos los periódicos de la nación habían aludido a él, si bien añadía que "los de izquierda le han recogido y comentado a su manera", aunque el solo hecho de "no haberse podido sustraer al comentario" revelaba, para el tronista, "la importancia y la

Pero estas demostraciones pronto serian objeto del control gubernamental y, así, el gobierno prohibiría, por acuerdo adoptado en el consejo de ministros del 10 de noviembre, la continuación de la celebración de los mitines revisionistas en base a la agitación antirrepublicana que

trascendencia del mismo", añadiendo que "el Gobierno, que lo autorizó y que no ha podido encontrar motivo para suspenderlo, ha debido creer en esa trascendencia, puesto que a rajatabla acaba de prohibir todos los demás cuya celebración se proyectaba".

Tras estos comentarios de los que se deduce la complacencia del cronista en enfrenar gobierno y derechas, pasaba este a describir el acto, dando cuenta de la extrema prudencia de los convocados, a pesar, según decía, de las provocaciones recibidas de los extremistas que, al parecer, fueron máximas en las intervenciones de los diputados sacerdotes. A pesar de ello, manifestaba el comentarista, los católicos demostraron con su actitud y sus palabras, su acatamiento a una República de la que lo único que no querían era su sectarismo religioso:

«En primer lugar, se destacó la sensatez y recta disciplina de los elementos de la derecha; a pesar de la enorme concurrencia (en más de 20.000 calculan todos) no se registró ni un solo momento de discrepancia. Se les había ordenado que, a toda costa se abstuvieran de toda manifestación en sus entusiasmos y, a pesar de verse constantemente provocados, insultados, acometidos a pedradas y escarnecidos en sus sentimientos más íntimos, sufrieron y callaron...

«No podemos menos de señalar, como contraste, la manera distinta de proceder de nuestros enemigos, ¡qué les hacían los que, dentro de un régimen de libertad, venían a escuchar las opiniones de sus diputados?...

«En este particular hemos de protestar, con el respeto necesario, pero con la máxima energía, de las demostraciones de odio y persecución sañuda de que fueron blanco nuestros venerables hermanos en el sacerdocio... A sacerdotes de mucho prestigio, en la ciencia, en la vida social, en la virtud, en todas las altas prendas que imponen la consideración aun a los más impíos, se les insultaba con lenguaje procaz y sucio, que no debieron tolerar las autoridades en nuestra culta e hidalga Palencia...

«A pesar de todo... se manifestó evidentiamente una cosa, la que nos conforta y llena de esperanza; que la mayoría de los españoles lleva muy adentro el sentimiento religioso y rechaza rotundamente la persecución contra la Iglesia, manifestada ya de sobra en la Constitución que se elabora y en las disposiciones que dicta el Gobierno de la República.

«Entiéndase bien: la opinión católica no va, ni quiere ir, ni la importa ir, contra la República; ésta encarna en sí un poder constituido y los católicos sumisos lo acatan.

de ellos se derivaba.⁽²⁰⁸⁾ Esta determinación no sería, sin embargo, causa de desaliento en las derechas que, contrariamente, pasaron a interpretarla como un éxito de las fuerzas desplegadas, tal como se desprende del editorial publicado por "El Debate" el 14 de noviembre, en el que, para exhortar a los católicos a continuar en el camino emprendido, eso sí, siempre dentro de los límites de la legalidad marcados por la jerarquía, indicaba que el acto celebrado en Palencia había abierto los ojos al gobierno ante la magnitud de la protesta católica. Era ello el primer triunfo de una campaña en la que los creyentes habían demostrado que sabían defender sus derechos por procedimientos legítimos. No había pues, conspiración alguna contra el régimen por parte de los católicos como lo demostraba la clara postura mantenida por la jerarquía, los diputados y la prensa de derechas; de existir esta, vendría de otras filas. Lo que los católicos combatían no era una constitución republicana, era "una Constitución sectaria."

«Bien claro lo dice el acto resonante del día 8, en Palencia: no es la República la que tiene que temer de nosotros; lo que no queremos es el sectarismo religioso, amparándose en la República.» (s.f., "Crónica General.- Un acontecimiento histórico", BOE de Palencia, año 81, 17 de noviembre de 1931, núm. 24, págs. 739-741).

Tras esta crónica publicaría el boletín eclesiástico palentino el telegrama cursado por los organizadores al Secretario de Estado vaticano, con el ruego de que hiciera llegar al papa la adhesión de los "veinticinco mil católicos" reunidos en Palencia, en el mitin que, expresaban, era el "comienzo reconquista venerandas tradiciones religiosas y patrias". A este telegrama contestaría el Vaticano enviando la bendición pontificia y haciendo votos "para que las oraciones de esos fieles y su colaboración por las vías legales y legítimas, con el Apostolado Jerárquico, produzcan por la misericordia del Señor, los deseados frutos, para bien de la Católica España" (8 de noviembre de 1931, "Del mitin monstruo.- Un telegrama de Su Santidad Pío XI a la Comisión organizadora del acto", BOE de Palencia, año 81, 1 de diciembre de 1931, núm. 25, pág. 758).

(208) "El Sol", 11 de noviembre de 1931 y "El Debate", 14 de noviembre de 1931.

Los católicos, pues, continuaba el editorial, no hacían más que ejercer su derecho, y para ello iban "por el camino ancho", frente al que, provocado por los que elegían otra forma de actuar mediante disturbios y coacciones, se había levantado la fuerza coercitiva del Estado, utilizando atribuciones excepcionales que se arrogaba el gobierno "para prohibir unos mítines en los que se protesta de unos artículos de la Constitución".

"Este abuso que hacen los enemigos de la Iglesia de la fuerza política que se les ha dado para trabajar por el bien de España, es el mayor triunfo de la campaña revisionista. Por eso nos confirmamos en que no hay que cejar en la actitud. Por Dios y por nuestro derecho. Y dentro de las vías justas y legítimas, secundando la norma que se nos ha dado en estos momentos y para estos momentos. Otra cosa, aparte de una desobediencia grave, sería una insigne torpeza. La victoria está asegurada, aunque no sea cosa de días ni de meses. Y tengan en cuenta los tergiversadores que cuando hablamos de victoria nos referimos a los derechos de la Iglesia en España. No hablamos para nada de la forma de Gobierno."

Esos mítines ahora prohibidos se celebrarían, no obstante algún día, con mucha mayor afluencia, pero lo urgente en ese momento era prepararse para las próximas elecciones, toda vez que "los enemigos de la fe nos temen precisamente en el terreno de la actuación ciudadana". Los católicos, concluía el editorial, estaban dispuestos a que la Constitución fuera revisada para desterrar de ella el sectarismo, "y la Constitución será revisada."⁽²⁰⁹⁾

A pesar de estas enardecedoras palabras del rotativo católico y de su proclamada postura de que los católicos debían reaccionar dentro de los cauces de la legalidad, no parece que en todos los casos se procediera en esta

(209) "El primer triunfo del revisionismo", 'El Debate', 14 de noviembre de 1931.

recomendada forma, dando lugar a la inmediata reaccion gubernamental, que, por las noticias de prensa recogiendo las versiones de ambas partes, no podemos deducir si fue o no exagerada.

"EL Sol" del dia siguiente a la publicaci6n de este editorial daria cuenta de la detenci6n en Madrid de dieciocho personas, entre las que habia "cuatro militares, un fraile mercedario, un jesuita, prefecto de Chamartin de la Rosa, dos aristocratas y un jefe jainista", "por un supuesto complot contra el regimen"; esta detencion, ademas, habia dado lugar al registro de la iglesia de la Concepci6n en la que se suponia que habia habido reuniones clandestinas y que incluso podian esconderse armas.⁽²¹⁰⁾ La noticia seria, sin embargo inmediatamente desmentida mediante una carta de Fernando COBIAN enviada a este y otros periodicos y en la que se daba cuenta de lo realmente ocurrido, motivado por el deseo de defender el templo mediante una oportuna vigilancia que habia sido debidamente autorizada por el director general de Seguridad,⁽²¹¹⁾ que, a su vez, paso inmediatamente a desmentir el contenido de dicha carta, dando cuenta de que se mantenia la detencion de diez de los implicados.⁽²¹²⁾

La decision gubernamental que, aplicando la ley de defensa de la Republica, se adoptaria, no se haria esperar y, asi, el 23 de noviembre el ministro de la Gobernacion, CASARES QUIROGA, daria cuenta de las sanciones de confinamiento en distinto grado a aplicar a los detenidos. Al hablar de ello el ministro habia destacado que "la conspiraci6n... era un verdadero embrion; pero mäs que de

(210) "El Sol", 15 de noviembre de 1931.

(211) "Los registros y hallazgos de armas en la iglesia de la Concepci6n.- Una carta abierta", "El Sol", 18 de noviembre de 1931 y "Una carta de los detenidos en la iglesia de la Concepci6n", "El Debate", 18 de noviembre de 1931.

(212) "El supuesto complot", "El Sol", 19 de noviembre de 1931.

carácter monárquico, de carácter religiosopolítico contra el régimen. Estaba en vías de organización y como ha sido dominada muy pronto, no tenía la menor importancia, ahora que de no haberse atajado, podría haber sido peligrosa mas adelante."⁽²¹³⁾

La última noticia sobre estos hechos sería la relativa a la visita efectuada por el obispo de Madrid-Alcalá, Dr. ELJO Y GARAY, al ministro de la Gobernación en petición de que se suavizaran las sanciones impuestas a los religiosos que iban a ser confinados.⁽²¹⁴⁾

9.4. Relevantes voces seculares sobre la cuestión religiosa en la Constitución.

Mientras los hechos hasta aquí examinados iban teniendo lugar no dejarían de alzarse voces individuales defendiendo o condenando el artículo veintiseis del nuevo texto constitucional.

Una de estas voces sería, precisamente, la del mismo ex-presidente del Gobierno provisional de la República, ALCALA ZAMORA, que se sintió obligado a dar a conocer al

(213) "La Ley de Defensa de la República.- Confinamientos y multas", "El Sol", 24 de noviembre de 1931.

(214) "El obispo de Madrid-Alcalá y los religiosos confinados", "El Sol", 25 de noviembre de 1931.

mundo, mediante la publicacion de diversos articulos en la prensa internacional, las razones de su dimision, directamente entroncadas con el tratamiento que a la Iglesia, con la que tan de cerca se habia comprometido, se pasaba a dar en la Norma Suprema. En el primero de tales articulos, insertado en el diario "Jornada" de Buenos Aires, explicaba que en el problema religioso la transigencia habia sido dificil, detallando el por que de la postura mantenida por los diversos grupos politicos en las constituyentes: el partido radical-socialista, que en España aun mas que en Francia hacia de ello su rasgo esencial, habia impedido que los socialistas, a su izquierda, fueran mas prudentes y habia arrastrado a los radicales a su derecha para que no actuasen como moderados. De ello habia resultado que

"Una fórmula de transigencia maxima, presentada por los republicanos templados con ingenua franqueza, recibida por su procedencia con recelos y recargada sucesiva a intensamente por los otros partidos, se transformó en horas en precepto persecutorio que no pudimos aceptar los republicanos partidarios de la tolerancia plena y de la paz religiosa."

No obstante, el era optimista en cuanto al devenir de este precepto, no, precisamente, porque abogara por la fórmula revisionista, sino porque el mismo transcurso del tiempo habria de hacerlo inoportante, como destacaba con singular ironia refiriendose a la postura adoptada por el gobierno en relacion con la enseñanza y las ordenes religiosas, postura que, como hemos visto, tambien habia destacado VIDAL en su ultima carta al cardenal FACELLI:

 "En cuanto a la fórmula votada para lo religioso, parece que se la corregirá con blandura, olvidos y aun contradicciones para su observancia. Por lo pronto, a las veinticuatro horas de haberse declarado que las ordenes religiosas son el peligro máximo para la enseñanza, se las presiona a que la ejerzan como necesidad suprema. Serán disueltas si se niegan a enseñar ahora, y deberán

serlo si se empeñan en seguir enseñando luego." ²¹⁵

No todas las voces serían, empero, tan optimistas como las de ALCALÁ ZAMORA y, así, al día siguiente de insertar este escrito volvería "El Debate" a tratar, con tintes mucho más negros, del texto constitucional en un nuevo editorial en el que citaría tanto este artículo como los discursos pronunciados por UNAMUNO o por LERROUX en los que, sin ambages, se criticaba el texto e incluso en el último caso, como también hemos visto apuntado por VIDAL, se aludía a su reforma. Para el rotativo, Gobierno, Parlamento y Constitución, antes de nacida, estaban desprestigiados. Se trataba, decía, citando la frase pronunciada por el rector de Salamanca, de una "Constitución de papel" cuyos preceptos en lo religioso, como había dicho el ex-presidente, serían, a la larga, inaplicables; de ahí que insistiera en destacar "el ascenso continuo de la marea revisionista", pedida por una gran parte de España "a la que no se ha dado cabida en la Constitución", cuando esta, para poder perdurar, debía ser nacional, obra de todos. Contrariamente a esta propuesta la situación de las discusiones parlamentarias no auguraban un futuro de entendimiento para las distintas ideologías que convivían en España a pesar del esmero y de la colaboración prestada desde un primer momento por los católicos:

"El debate constitucional marcha por un camino sin salida No conduce a parte alguna. No hay

(215) "Un artículo de Alcalá Zamora", "El Debate", 23 de octubre de 1931. Dadas las fechas de publicación hemos indicado que se trataba del primero de los artículos del ex-presidente ya que, que sepamos, no fue este el único que escribió. BATLLORI y ARBELLOA dan noticia del publicado por ALCALÁ ZAMORA una vez elegido presidente de la República en el *New York Times* y traducido por "El Sol" el 10 de diciembre de 1931, artículo en el que volvería a hablar del problema religioso en la Constitución, aunque en esta ocasión con una mayor suavidad, si bien reiterando que la paz de los espíritus podría lograrse a pesar de lo plasmado en el texto constitucional "si el desarrollo en las leyes se inspira con criterio liberal" *Esquiesia i Estat durant la segona...* II, pág. 255, nota 8.

horizontes claros en la perspectiva. ¿Y quien podrá decir que ello sea inevitable?. Tampoco, en justicia, se puede culpar a supuestos enemigos de la República como causantes de este mal. A las derechas -no sabemos si sinceramente o porque conviene buscar un culpable- se les señala como uno de los elementos contra los cuales ha de defenderse la República. Pero es lo cierto que las derechas, y singularmente, lo más genuino de ellas, la Iglesia, los católicos, no han saboteado a la República, sino que, desde su advenimiento, observaron correctísima conducta. Ni siquiera mantuvieron una inhibición aisladora. Fueron colaboracionistas, extremaron la concordia. Pero la concordia se ha roto. El régimen no ha seguido la amplia carretera, que es de todos, sino los caminos que sólo a los partidos corresponden. Por eso marcha por ellos la República, pero no el país. Y por donde va -lo repetimos- no encontrará salida. Vuelva a la carretera. Donde todos cabemos. Por donde todos podemos marchar, juntos, bajo una misma luz y hacia una misma meta."

Las palabras pronunciadas en el hemiciclo por UNANIMOS y al que el rotativo se habia referido serian reiteradas por este en un artículo insertado en "El Sol" al mes de publicado el editorial comentado, palabras en las que D. Miguel condenaria sin paliativos, aunque con su habitual gracejo, un texto constitucional que, a su juicio, nacia muy alejado de la tradicional religiosidad española, cuya necesaria profundidad no dejaba, por supuesto, de reclamar:

"... cada cual tiene su vocacion y destino, y si la de otros es dictar decretos, organizar elecciones o tramar Constituciones, la de este comentador que monodialega con su lector consabido es la de burgar en la religiosidad latente española, que es piedad, hasta que se desperce y así se desemperece y despierte la que no este despierta ya, y esta se de mejor cuenta de si misma y se reforme. Que estampen en el papel constitucional que no hay religion del Estado en España; pero el comentador sabe que hay religion nacional, y lo sabe porque siente el

eco que entre sus compatriotas -no sin sorpresa suya en un principio- han encontrado sus pesquisas- y hasta inquisiciones- del sentimiento trágico de la vida, de la agonía del cristianismo, del misterio del Cristo de Velázquez..." (217)

Vivo contraste con estas frases unamunianas tendria la postura manifestada a los cinco dias por AZANA, que en unas declaraciones publicadas por el mismo periodico expresaria su satisfaccion porque el articulo veinticuatro de la Constitucion habia acogido, finalmente, la formula por él propuesta, indicando que el hecho que ello hubiera determinado la retirada del entonces presidente del consejo de ministros se debia a que no representaba la ideologia avanzada de la mayoria de la Camara, pese a que su labor de conciliar diferencias habia tenido gran relevancia en los primeros momentos de la Republica.

La conviccion de AZANA de haber logrado un hito importante en la votacion del articulo veinticuatro era meridiana y totalmente opuesta, respecto a la inmediata andadura del futuro, a la de ALCALA ZAMORA. Se ignoraba en ella, tambien, la bandera revisionista alzada por parte de los catolicos y, lo que es mas grave en la vision politica, se minimizaban las consecuencias del impacto producido, y que bajo su gobierno se seguiria produciendo, en las filas catolicas:

"La separacion de la Iglesia y del Estado, ya lograda, liberta a España de una vez para siempre de la tutela de la Iglesia. La solucion que tenemos proyectada es perfectamente limpia y normal. Mas aun, es hasta juridica. Fuera de los ataques verbales, y acaso algunas manifestaciones en el Pais Vasco, es ingenuo creer que puede surgir ninguna oposicion a esta medida, pues han

(217) "La religion y la politica, - Comentario", "El Sol", 22 de noviembre de 1931.

pasado ya los días en que era posible una guerra civil. La excitación del momento se desvaneciera muy pronto por ley natural."

Su postura respecto a la presencia de la religión en la vida española de la época no podía estar, por otra parte, más alejada de la que acabamos ver manifestada por UNAMUNO y, como andando los años se revelaría, de la realidad:

"Ocurre esto tal y como tenía que ocurrir, pues la influencia de la Iglesia en España es prácticamente nula. Léase la literatura contemporánea, bien sea dramática o novelesca; váyase a las Universidades u otros centros culturales, y se notará una total ausencia de influencia religiosa. Los mejores talentos de España se hallan enteramente libres de ella, y nuestras aspiraciones no tienen nada que ver con la religión. Nuestra mejor obra creativa desarrollada durante varios años se halla intacta de contagios religiosos. No quiero decir con esto que seamos hostiles al catolicismo como tal: nos es simplemente indiferente. "

No se contentaría AZARA con esgrimir sus predicados respecto a lo que podía considerarse la élite intelectual española. Para el la posible defensa de la influencia de la religión en España venía entretendida con una caduca interpretación de su historia -que tantas veces hemos visto defendida por el episcopado- que en aquellos momentos, a diferencia de la espiritualidad popular que UNAMUNO veía, ni siquiera era aplicable, según parece deducirse de sus frases, a las bases más populares:

"Es curioso observar los errores que cunden por el extranjero a este respecto. Los extranjeros suelen recordar los viejos días de las cruzadas, cuando por razones dinásticas los ejércitos españoles luchaban bajo el emblema de la cruz. Olvidan que, si bien en un tiempo, en España como en otros países, fue la religión un punto de reunión para aquellos patriotas que luchaban por la unidad nacional, hace ya mucho tiempo que pasaron los

días en que la religión era una fuerza inspiradora. Ningun campesino en condiciones tan prósperas como el campesino vasco de hoy se embarcará jamás en una aventura que, en caso de fracasar, le sumiría en la ruina. Tenemos que afrontar problemas mucho más importantes que ese."

Solo nos resta aludir, para cerrar esta referencia a las voces seculares que se alzaron comentando la cuestión religiosa en la nueva Constitución al duro editorial de "El Debate" de 11 de diciembre, tras la publicación oficial de la misma y la elección de ALCALA ZAMORA como presidente de la República, en el que, si bien finalizaba deseando que este y sus sucesivos gobiernos lograran hacer "un Estado para todos los españoles", no dejaba de proclamar la situación de "persecución a la Iglesia" que se había iniciado con la aprobación de la Norma Suprema.

No dejaba el rotativo de reconocer la labor realizada por el político en defensa de la religión, si bien hubiera querido que, tras sus intervenciones en las Cortes, hubiera tenido "una conducta más consecuente". Era, empero, entre los prohombres de la República, el que con mayor agrado veía elevarse a la primera dignidad del Estado y al que, secundando los mandatos de los pontífices y de la jerarquía española, se aprestaba a tributar leal acatamiento.

Tal acatamiento, empero, no podía ir acompañado de entusiasmo, "asistimos a la fiesta de hoy como espectadores respetuosos; pero no podemos sumarnos al regocijo oficial."

"... la Constitución es injusta. No está en ella la fórmula de convivencia de todos los españoles."

(18) "El rumbo seguro de la República.- El presidente del Consejo, señor Azaña, habla sobre los problemas españoles", "El Sol", 29 de noviembre de 1931.

No guiaba la parcialidad esta afirmación, continuaba el editorial, otro publicado por el "Times" del día ocho, comentaba precisamente que el dictado de la ley de defensa de la República venía a evidenciar como las Cortes habían fracasado "en su tarea de encontrar un terreno de convivencia para todos los españoles".

"Esta es la verdad, más patente hoy que nunca, porque la ley de Defensa se ha añadido al texto constitucional. Nosotros no podemos, en consecuencia, sentirnos satisfechos con un Estado que nos sitúa en plano de excepción, que injustamente limita y cercena la libertad religiosa, que ha incluido en la Constitución medidas francamente persecutorias contra la Iglesia. Nos hemos mostrado siempre contrarios a toda rebeldía. Pero no a cesar la lucha por nuestro derecho para agotar todos los recursos legales. Y en esta misma disposición hay masas enormes de ciudadanos extendidas por todos los ámbitos del país. Mientras insista el Gobierno de la República en su política de persecución, persistirán esas fuerzas católicas en defenderse, aceptando una guerra legal que ellas no han provocado.

"No nos hagamos ilusiones. Hoy no es un día de paz para España. Podrá serlo de paz material siquiera no falten, por desgracia, lamentables sucesos. Pero la guerra espiritual ha sido declarada por el Poder público a un sector inmenso de ciudadanos. La primera preocupación del nuevo Presidente de la República debería ser la de llegar al restablecimiento de una verdadera paz en la nación. Teniendo presente que para ciertas cuestiones no existe eso que se suele llamar "fórmula". Podrá valer tal recurso en el orden económico, o en las combinaciones políticas. Pero cuando se inicia una persecución a la Iglesia no hay más paz que la que se pacte con la Iglesia misma." (219)

9.5. La continuación de los escritos de la jerarquía: arzobispo de Burgos y obispos de Orense, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Palencia, Córdoba, Barcelona y Málaga.

Ya hemos visto que coincidiendo con la aprobación del articulado constitucional que mas afectaba a los intereses de la Iglesia tuvo lugar en todo el orbe católico, el 25 de octubre, la celebración de la festividad de Cristo Rey en la que el papa habia pedido que se rogara por la situación de España.

Dada esta petición pontificia no podia dejar de ser nuestro país el primero en unirse a tal celebración como lo atestiguan los numerosos escritos del episcopado exhortando a los fieles a unirse a las intenciones del papa, que eran los intereses de España. En la generalidad de estos escritos, sin embargo, no reflejaron los obispos sus pareceres sobre la situación del momento ni, singularmente, sobre lo que venian aprobando las constituyentes. Entre los boletines consultados tan solo hemos encontrado estas suaves, comedidas y genericas palabras, un tanto alejadas de la realidad del momento, del arzobispo de Burgos al exhortar a sus fieles a la celebración de la fiesta:

"... para nuestra Patria y en las circunstancias por que atravesamos ha de ser ante todo una fiesta de impetración de auxilios y luces del divino Redentor, para que ilumine a nuestros gobernantes a dirigir a esta amadisima Nación por los senderos de la paz y prosperidad, fortaleciendo los sentimientos religiosos de nuestro pueblo para que acate y venera como a unico soberano de sus almas a Cristo Redentor, cuya doctrina es la unica verdadera, así como tambien la unica fuente de bienestar y progreso de los pueblos.

«Cristo es la luz... Meditar profundamente estas ideas, que deben estar sobre toda otra, y a las que es forzoso subordinar todas las demás, por su trascendencia; a fin de que la nueva patria se fundamente en ellas para su prosperidad.»

Mas si el episcopado español, al invitar a los fieles a la festividad de Cristo Rey, guardo silencio sobre los momentos que vivia la Iglesia, no actuaria en igual forma el Vaticano que, una vez transcurrida la festividad y comunicado por las diversas diocesis el fervor de los fieles en su celebracion, cursaria a la nunciatura un nuevo comunicado congratulándose por la union de la Iglesia española al pontifice y no dejando de aludir tanto al anteriormente enviado como a la situacion creada por la aprobacion de los articulos de la Constitucion que mas atañian a los intereses de la Iglesia.

"Me es grato significar a V.E.R. que el Santo Padre se ha enterado con vivo placer de todo cuanto V.E. se apresura a comunicarme... acerca del consolador entusiasmo religioso y de las especiales pruebas de afecto al Papa y a la Iglesia con que el pueblo de España ha celebrado este año la fiesta de Cristo Rey.

«Su Santidad no tenia en verdad la menor duda de que los fieles de esa nobilísima nacion, sabrian comprender el grande amor con que el dicto el augusto Mensaje a España y Su vivo dolor por las insanas tentativas de arrancar de sus almas la fe de sus mayores.

«Ahora es para el motivo de particular consolacion que precisamente la fiesta de Cristo Rey haya sido ocasion propicia de manifestaciones tan edificantes de fervida piedad eucaristica, de gratitud y plegarias por el Vicario de Cristo... "1420"

(220) Este comunicado, fechado el 20 de noviembre de 1931, seria trasladado por el nuncio a todos los prelados el 9 de diciembre y mandado insertar por estos en

Desconocemos las razones que motivaron que la jerarquía española, teniendo como tenía el gran punto de partida del mensaje pontificio, guardara silencio sobre la situación creada por la Constitución en las ciudades

los respectivos boletines diócesanos a lo largo de esta mes y de enero de 1932.

Entre los boletines consultados los más explícitos en la referencia a la mencionada festividad serían los de Valencia y Coria. El primero publicó el 15 de noviembre una crónica relativa a los actos que habían tenido lugar tanto en el Vaticano como en toda España, en la que destacaba que el papa había ofrecido la misa por las necesidades de las naciones y particularmente "para pedir días mejores, la cesación de la gran tribulación que hoy sufre la Iglesia de España, el fidelísimo pueblo español" e indicaba cómo España, que había dado tantas glorias a la Iglesia, había tenido en el corazón del papa ese día un lugar de privilegio, rogando con él, "por las pesadumbres de España, los católicos de todo el orbe". Tal acto del papa, señalaba el cronista, encendía la esperanza en el pueblo español, derramando

"... una riada de luz sobre las tinieblas que han extendido por esta península heroica los enemigos de Dios y de su Iglesia ... Pide, especialmente a los santos españoles que brillaron para la gloria de España, que hagan llegar la súplica del Papa al Rey de los cielos, unida con las infinitas plegarias de toda la Iglesia del mundo, para que cesen las dificultades en un pueblo que tantas páginas de fe atesora en su historia, y pide la clemencia divina para que restituya a toda la gran nación católica toda la gloria y esplendor con que brilló durante diecinueve siglos."

La crónica destacaba que *L'Osservatore Romano* había dedicado su primera página a esta celebración resaltando la petición por España y los sentimientos del papa y a continuación trataba de los actos realizados en la nación, aludiendo a la misa celebrada por el nuncio y por los prelados en sus respectivas catedrales uniéndose a las intenciones del papa, con "extraordinaria" afluencia de fieles y comuniones "innumerables", señalando que "miles y miles de fieles" habían desfilado por la nunciatura para expresar su adhesión al papa, "El Papa -decía el cronista- con unas frases que hacían recordar las frases pronunciadas en el famoso discurso de AZARA en las Cortes- ama intensamente, paternalmente a la nación española, católica ante todo, por sobre todo."

Finalizaba la crónica reseñando los actos que habían tenido lugar en Valencia, destacando que el predicador de los cultos vespertinos, aludiendo a una frase del evangelio del día: "Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César", se había extendido "en breves consideraciones sobre las relaciones de la Iglesia y el Estado", tras esta plática había tenido lugar una procesión por el claustro "con una ingente multitud". *ib. id.* "La fiesta de la Realidad de Cristo". BDE de Valencia, 15 de noviembre de 1931, núm. 2135, págs. 374-376).

Muy distinta a esta sería la referencia publicada por el boletín eclesiástico de Coria el 1 de diciembre, boletín que, aludiendo también a la resonancia en España de la pración del papa, tuvo por principal objeto reproducir párrafos

exhortaciones a los fieles a unirse al papa en la festividad de Cristo Rey.

Sea por lo que fuere, lo cierto es que ello no quiere decir que el episcopado, fuera de esta exhortación, independientemente de ella, no alzara su voz en amarga queja por la Constitución y como orientación de los fieles.

Entre los boletines consultados el primer obispo que, una vez aprobado el artículo veinticuatro en las Cortes, dirigió sobre el su palabra a los fieles, sería el de Orense, Dr. Florencio CERVINO GONZÁLEZ en un escrito que, si no exento de dureza, encerraba un análisis demasiado

del artículo publicado por *L'Osservatore Romano* con ocasión de la festividad de Cristo Rey. El periódico vaticano había sido en esta ocasión de extrema dureza al enjuiciar la situación española que comentaba detalladamente, dando cuenta de todas las nuevas regulaciones constitucionales y augurando un porvenir de muy negros tintes para el país:

"Los artículos de la nueva Constitución de España, instauran oficialmente un estado de persecución continua. La lucha contra la Iglesia, la confiscación de sus bienes, la expulsión de las Congregaciones y ordenes religiosos, la supresión de la libertad de enseñanza, la abolición del catolicismo en la escuela, el divorcio, las violencias cometidas con personas, cosas y edificios sagrados, abren para la infeliz nación una página de historia que se asemeja exactamente al prólogo de una inmensa tragedia, tragedia de espíritus, de civilización, de tradiciones; salto bruto en el vacío; atentados a todas las glorias españolas que en la Religión y en la Iglesia Católica hallaron el impulso que las levantó a incomparables grandezas.

Y todavía no está satisfecha la secta. A la turbia aurora seguirá un mediodía de tempestad, prelude de un crepúsculo pavoroso. Mortales convulsiones se preparan en el hidalgo país que ha dado un ejército de Santos a la Iglesia, una cohorte de genios al arte cristiano, tantos y tan inolvidables testimonios de fidelidad a la Sede Apostólica. Y en medio del turbio caos, se clava ya, hambriento de su presa, el ojo de Moscú. Si no interviene la mano de Dios, España resbalará, fatalmente, por el actual despañadero hasta el fondo del abismo.

«Bien merece, pues, la catolicísima España toda la compasión del mundo católico, y toda la solidaridad de los creyentes. Por eso hoy se ora por ella en todas las iglesias del orbe; y a la cabeza de esa inmensa muchedumbre orante está el Papa.»

(s.f., "La plegaria del Papa", BOE de Corsia, año 66, 1 de diciembre de 1931, núm. 23, págs. 365-367.)

superficial de lo que estaba ocurriendo en España y de la ideología que podía impulsar a muchos de los que pugnaban por un menor predominio de la Iglesia, si bien en este análisis no dejaba de reconocer que muchos de los que así actuaban podían ser católicos, unos católicos que, para él, estaban sirviendo a dos señores. La solución que proponía para combatir a los que luchaban contra los intereses de la Iglesia estaba llena, por otra parte, en los momentos en que, como hemos visto, se iniciaba con pujanza la campaña revisionista, de lo que no cabe considerar más que de cierta puerilidad, toda vez que pretendiendo hacer, como veremos, un "censo de creyentes", más parece que lo quería como consuelo ante la situación, que como base para alguna posible actuación, ya que, por el momento, no apoyaba en esta idea ninguna concreta orientación a sus diocesanos en pro de la defensa de la Iglesia.

Comenzaba el escrito aludiendo a los "gravísimos excepcionales conflictos de índole espiritual y religiosa" por los que atravesaba España, que parecía "apostatar oficialmente" de su fe, que era lo que esperaban los enemigos del evangelio, cuando este había sido el creador "de nuestra nacionalidad, recia e invencible" y había dado toda clase de glorias y santidad a la historia española.

"¿Y todo esto se acabaría ahora con el advenimiento de la república que prometía respetar nuestras viejas creencias, esencialmente divinas? ¿Cortada será ahora nuestra Historia con tan ancho y negro abismo que no quepa relación alguna, comunicación posible entre la verdad, soberanía, virtud y poder de Cristo que nos hizo suyos, ... y el nuevo período que se abre, excluyendo radicalmente la Fe, el Evangelio y la Cruz redentora, para hacernos o poder hacernos del diablo, con plena libertad, eso sí, para todos los odios, blasfemias, errores y herejías, por antisociales que sean, vicios y pasiones, bestialidades e instintos de la carne vil?"

Existia, desde luego, incompatibilidad entre la Iglesia y la herejia, entre la libertad evangélica y "las brutales concupiscencias que degradan al hombre", pero ahora,

"habrá de extenderse en adelante esta incompatibilidad a todas las manifestaciones de la vida nacional española, de suerte que se de por acabado para siempre, segun se dice y pretende, todo aquello,⁽²²¹⁾ que fue, cabalmente, nuestra historia católica, gloriosísima, para comenzar todo esto,⁽²²¹⁾ que será lo nuevo, la iniciación de una historia jamás aquí conocida de ateísmo español?"

Eso era lo que afirmaban y pretendían los enemigos de la religion, los cuales

"Lo han intentado, lo han decretado ya y definido a su manera por manera legal y solemne, y aseguran que será su triunfo definitivo, completo; pues que no solo quedará abogado, constitucionalmente suprimido, muerto, nuestro pasado religioso, mas también incapacitado, a fuerza de opresiones y despojos, para resucitar y vivir."

Esta pretension, sin embargo, nunca se cumpliría ya que no era tan facil de arrancar la fe y era imposible que los españoles pasaran de un dia a otro de ser católicos a ser ateos. Urgia, no obstante, "conocernos y contarnos" y, por ello, hacia la paradójica solicitud a sus fieles de que manifestaran su fe:

"Dentro de la ley que nos rige y guardando todos los respetos, consideraciones y acatamientos a las autoridades que nos gobiernan; utilizando la libertad que no querran negarnos de ser leales y sinceros, estimamos oportuna la hora para rogar a cuantos leales y sinceros sean que, en caso de no haber cambiado de religion -si cambiaron nada va con ellos- y permanecer firmes en la Católica, ... se dignen así manifestarlo con valor por manera autentica y fidedigna, bien que en la ocasion y forma menos molesta, a su arbitrio, con tal que

(221) En bastardilla en el original.

sea cuanto antes, en atención al fin que proponemos, que es, como queda dicho, *conocernos y contarnos*. "(222)

Tal propuesta la hacía el prelado porque, añadía, parecía "que se hicieron bastantes claros en nuestras filas y hay deserciones, apostasías e indiferencias". Estos desertores eran, además, los que más se manifestaban y, por ello, preciso era oponer al ruido que hacían la verdad del número real de los creyentes.

"...estos son, por otra parte, los que más ruido hacen, y parecen multiplicarse de día en día a fuerza de mítines, manifestaciones y discursos, y es tal su poder e influencia que al sumarse a otros de sus mismos ideales, logran el triunfo; deduciendo de aquí que superan en número a los católicos de verdad, que de hecho se ocultan y ni a declararse se atreven ¡y ojalá que no deban a los mismos católicos, "de esos que se prestan a servir a dos señores", el logrado triunfo de que se envanecen y a lo mejor aprovechan para ahora inutilizarlos socialmente y suprimirlos! Así se multiplican ellos, se cuentan y se declaran, ¡y por qué imitando su prudencia, no habremos de contarnos y declararnos nosotros? Trátase sencillamente de que os presentéis, o remitáis en la primera ocasión que se os ofrezca una simple firma o tarjeta a vuestros respectivos párrocos, haciéndoles constar que sois los mismos de siempre: católicos perseverantes a cara descubierta y frente erguida capaces de confesar a Jesucristo en todas partes y no avergonzaros de su ley..."

Quería el prelado puntualizar sobre este ruego que no era "ningún acto de conspiración contra las autoridades civiles", para las que eran "y deben ser todos nuestros respetos" pues la fe les hacía considerarlas como puestas por la providencia. Lo que él pretendía era que la verdad se manifestara "y su misma fuerza disipe las sombras y mentiras". Por ello confiaba en que los que siguieran considerándose católicos lo expresaran en la forma que había

(222) En bastardilla en el original.

indicado, con lo que se podría hacer "un censo o padrón de los verdaderos creyentes orensanos." (223)

Prolífico, como no podía ser menos, volvería a ser el Dr. GOMA al comentar el artículo sobre la cuestión religiosa en una pastoral monográfica que llevaba precisamente por título "Algo sobre el artículo 24 de la nueva Constitución" y que comenzaba recordando a sus fieles cómo había estado en permanente contacto con ellos desde que "a comienzos del año pasado se desató en nuestra patria la pasión política para derribar el antiguo régimen monárquico, hasta que se publicó el proyecto de Constitución del Estado" que seguía discutiéndose esos días, cosa que había hecho en cumplimiento de su deber de adoctrinarlos "en las cuestiones gravísimas que se han agitado durante estos meses de vida febril, en el orden político, social y sobre todo religioso."

Recordaba el obispo que ya antes del cambio de régimen se había dirigido a ellos expresándoles un presentimiento que era ya un hecho "que nos avergüenza y apena"; no era este otro que "como ha ocurrido siempre que se ha agitado la pasión política, sea la Iglesia la que más sufra de los ataques de los enemigos del orden establecido en las contiendas que parecen avicinarse." Al cabo, el pueblo había elegido la forma republicana de gobierno en un gesto sereno, tristemente manchado por hechos posteriores. Sea como fuere quería recordar ahora como los obispos habían invitado al pueblo fiel a acatar la nueva forma de Estado, invitación que en el caso del Dr. GOMA dejaba entrever, como

(223) s.f., "A Nuestros Venerables Párrocos, Sacerdotes y fieles católicos orensanos", BOC de Orense, año 98, 26 de octubre de 1931, núm. 20, págs. 324-328.

otras veces, que no surgia precisamente de un gesto espontaneo de sus convicciones:

"Convencidos de que, -por la fuerza misma de las cosas,- debia ser esta la forma de gobierno en España, sin averiguar las causas que pudieron determinar el salto insospechado, siguiendo altisimas normas que Nos dio el representante de Su Santidad en España, los dictados de la razon y hasta el sentido politico tradicional de la Iglesia, concretado en copiosa literatura de los Papas en los ultimos cincuenta años, acatamos plenamente, noble y concienzudamente, la nueva forma del poder politico, y pocos dias despues, deshaciendo prevenciones y reparos de muchos espíritus rectos, os llamabamos, por Nuestra Carta Pastoral *Los deberes de la hora presente*,⁽²²⁴⁾ a acatar al nuevo regimen y a colaborar con el para el bien comun de nuestra querida España."

Recordados esos momentos y esa actitud suya, que ya hemos analizado, reiteraba el prelado su postura exhortando a sus diocesanos a seguir acatando al regimen, pese a que "desde las alturas del poder se han inferido grandes agravios a nuestras creencias y tradiciones venerandas"

En esos momentos, una vez que habia sido votado el articulo veinticuatro de la Constitucion, seguia dandoles la misma directriz, pero a ello no podia dejar de anadir ahora unas claras prevenciones a las que debia limitarse dicho acatamiento en la conciencia de todo catolico:

"...al colaborar con los poderes de la republica, salvad vuestras conciencias; rechazad, dentro de la ley, toda imposicion de preceptos legales que importen contradiccion y desacato a las leyes de Dios... cuando los hombres, pasando por encima de las leyes divinas, aun constituidos en Cuerpo legislador, vayan directamente a violar las conciencias, promulgando leyes que estan en oposicion flagrante con los preceptos divinos."

(224) Ver el epigrafe 2.3. del capitulo "La Iglesia ante la Republica".

La razon de estos consejos, seguia diciendo el prelado, era obvia para quienes conocian la jerarquia de los valores, debiendo subordinarse todo fin terreno y toda ley a la salvacion de las almas. En virtud de este principio no podia prevalecer para los creyentes la regulacion que acababan de aprobar las constituyentes, cosa que el Dr. GOMA afirmaba partiendo del principio general que enunciaba de prevalencia de la norma religiosa sobre la norma civil, por más legitima que esta fuera

"... cuando el poder legislativo de los hombres, con capacidad y autoridad legitima para legislar, se enfrenta con el poder del Supremo Legislador y va directamente a la anulacion de la ley de Dios o de su Iglesia, o a su contravencion, la conciencia humana, sometida a la ley de Dios, que es la verdad y la libertad, no solamente queda libre de la ley humana, sino que no es libre de acatarla.... No hay derecho contra el derecho de Dios."

Asi enunciado el principio general descendia el prelado al analisis concreto de la norma constitucional con el proposito de contrastarla con las ensenanzas de la Iglesia, comenzando por referirse al "ateismo del Estado" plasmado en el articulo veinticuatro y manteniendo que, segun las ensenanzas eclesiasticas este "no podia ser ateo". Establecido, segun habia expresado Leon XIII, que debia profesar una religion, esta solo podia ser la unica verdadera.

La soberania politica sobre el poder espiritual era tambien contraria a las ensenanzas de la Iglesia, toda vez que el poder de esta era superior a ningun otro. De ahi que el Estado tuviera la obligacion de tributar a Dios el reconocimiento y culto debidos.

Frente a ello la Constitucion no solo negaba estos principios sino que preteria sus deberes para "con la venerable clase sacerdotal" al determinar la extincion del

presupuesto del clero, punto en el que el Dr. GOMA anunciaba insistir especialmente aunque ahora se limitaba a destacar que a partir de enero de 1934 "todo el clero español quedara desposeído de sus medios modestísimos de vivir", aunque antes de esa fecha, si así se aprobaba en el presupuesto, quedaría indotado el culto de las iglesias y suprimidas las consignaciones del personal en las parroquias. De ahí que "se debiera proveer por medios extraordinarios y nuevos a la decorosa subsistencia de los ministros del Señor".

Tras esta referencia, el prelado protestaba por la fórmula acuñada para disolver a la Compañía de Jesús, indicando que mas hubiera entendido una "disolución fulminante de todas las órdenes religiosas" o incluso "la misma disolución de la Compañía de Jesús sin motivarla como lo hace esta ley", en base al insólito apoyo del voto de obediencia al papa, cuestión esta sobre la que el Dr. GOMA pasaba a explayarse ampliamente, para referirse a continuación al tratamiento dado por la Constitución a las demás órdenes religiosas respecto a lo que destacaba la regulación relativa a la "disolución de las que en su actividad constituyan un peligro para la seguridad del Estado"; la "inscripción de las que deban subsistir en un registro especial, dependiente del ministerio de Justicia"; la "incapacidad de adquirir y conservar por si o por persona interpuesta mas bienes de los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento de sus fines privativos"; la "prohibición de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza"; la "sumisión a las leyes tributarias del país" y la "obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de los bienes, en relación con los fines de la Asociación", destacando que los bienes de las órdenes religiosas podían ser, según la Constitución, nacionalizados.***

(225) Ver el apéndice sobre las órdenes y congregaciones religiosas.

Concluida esta enumeracion y su consiguiente analisis insistia el prelado en que el proposito de su pastoral era ilustrar a los fieles en las verdades catolicas "sobre estos puntos fundamentales de la Constitucion, para que os hagais cargo de los deberes que impone la ley humana y de los derechos que, en las mismas materias, puedan alegar la ley divina y eclesiastica y hasta la misma ley natural", cosa que hacia para invitarles "a conservar incolume el deposito de la verdad y de la tradicion cristiana". Esta invitacion, no obstante, la hacia el obispo dentro de unos concretos limites que no dejaba de condicionar a los acontecimientos futuros:

"... rogar a Dios que... disponga las cosas humanas en forma que no nos veamos jamás constreñidos a obrar contra nuestra conciencia. En el cumplimiento de estas disposiciones legales que acabamos de comentar sencillamente, como en otras que tal vez toquen mas pronto y mas inmediatamente a la practica de la vida cristiana, jamás os incitaremos a la resistencia, cuanto menos a la rebeldia, mientras podamos movernos en el ambiente de la ley sin chocar con nuestra conciencia o con la ley superior de Dios o de la Iglesia."

Si necesarias eran virtudes como "la paciencia, la caridad y la prudencia", preciso era tambien "ejercer la del santo celo por la gloria de Dios y el advenimiento de su santo reino". Ello queria decir que los fieles debian

"...aprovechar toda coyuntura, dentro del orden legal establecido, para la restauración de las cosas en Cristo, yendo con todo nuestro esfuerzo a la conquista de cuanto hemos perdido, que es muchísimo, tal vez por nuestra desidia."

Concluia la pastoral con unas frases apoyadas en el evangelio que cabe considerarlo como una invitacion, aunque no se dijera claramente, a la unidad de los catolicos en contra de una Constitucion inaceptable para sus creencias:

"Si es necesario hacernos violencia -y el rudo batallar siempre la exige- hagamonosla, porque está escrito, y es palabra del mismo Hijo de Dios, nuestro santísimo Señor Jesucristo, contra quien se ha desatado el poder de las tinieblas, que "el reino de Dios se alcanza a viva fuerza, y solo los que se la hacen, lo alcanzan."..."

Más radicales que las palabras del Dr. GOMA, al no ir rubricadas por la firma del prelado, serían las contenidas en el suelto publicado en el boletín eclesiástico de Palencia por las mismas fechas, bajo el expresivo título "Consolamini invicem...". Suelto que, dirigido indudablemente a los sacerdotes, aunque no lo indicara, se iniciaba instándoles a conservar la serenidad "en medio del torbellino que se ha desencadenado sobre nuestra España", ya que, siendo su fin sobrenatural, igual les daba "la tormenta como la calma" pues la fe que los animaba siempre fue fuerte, de ahí que, cualesquiera que fueran las "revoluciones"

"No destruirán a Dios. ni a Jesucristo, ni al cielo, ni al infierno; ni podrán conseguir, por mucho que lo procuren, que nuestra Religión deje de ser la única verdadera."

La situación por la que atravesaba en esos momentos España era de una claridad meridiana para el redactor: se trataba, pura y simplemente, de una verdadera persecución religiosa, "y que esta tormenta de odios y de injurias, que

(226) 30 de octubre de 1931, "Instrucción pastoral.- Algo sobre el artículo 24 de la nueva Constitución". BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 31 de octubre de 1931, núm. 694, págs. 768-811.

esta persecución que padecemos, sea por la causa⁽²²⁷⁾ de Cristo a nadie le puede caber la menor duda."

No dejaba, sin embargo, de reconocer que no en todos los casos los perseguidores actuaban movidos por motivos contrarios a la religión. El resultado de sus actos, no obstante, solo podía conducir a desterrarla de la conciencia de los españoles:

"... esos ataques a fondo⁽²²⁷⁾ al dogma y a la moral cristianos desde las alturas del Poder y en las vastas regiones del pueblo llano, obrero sobre todo; esas disposiciones sectarias y esos desprecios volterianos, ¿qué son y qué significan, sino una verdadera persecución religiosa? Todo eso, aun prescindiendo de las intenciones, que, es de justicia reconocerlo, no en todos serán perversas, va encaminado *directa e inmediatamente a la destrucción⁽²²⁷⁾* de la religión católica, si posible fuera, y a desterrarla, y esto si que es posible, aunque esperanzas en Dios que no lo consentirá, del corazón y de la mente, del alma de los españoles."⁽²²⁸⁾

Si este suelto del boletín eclesiástico palentino más trataba de la situación general de España que del tema específico de las normas constitucionales recién aprobadas, aunque el tratamiento no dejara de describir una situación que mucho tenía que ver con tal aprobación, no sería tan genérico otro suelto publicado en el mismo número del boletín, que, dado su estilo y contenido venía a ser indudable complemento de este; suelto que también llevaba como pórtico otro expresivo título en latín: "Beati qui persecutionem patiuntur" y que comenzaba señalando que en la última quincena del mes se habían producido acontecimientos "tal vez los más trascendentales para la

(227) En bastardilla en el original.

(228) s.f., "Consolamini invicem...", BOE de Palencia, año 81, 31 de octubre de 1931, núm. 23, págs. 700-701.

Iglesia española" y que no eran otros que la conculcación de las relaciones entre esta y el Estado resultante de la aprobación del artículo vigésimo cuarto de la Constitución.

Si toda la letra y espíritu de dicho artículo herían el alma de los católicos, lo más lacerante para el cronista era el tratamiento que en él se daba a las órdenes religiosas "tan perseguidas sin merecerlo" que, habiendo hecho todo cuanto habían hecho por la sociedad y por la patria, eran ahora "el blanco de las iras sectarias".

Más la Constitución no tenía solo este artículo contrario a la Iglesia. Al poco de ser aprobado lo habían sido también las disposiciones relativas a la enseñanza, que eran totalmente opuestas a su doctrina, oposición que -y preciso es destacar lo paradójico de este pensamiento- no solo se basaba en el laicismo de la norma en sí sino en otro punto que, -no se entiende por qué-, también consideraba el cronista producto directo y refuerzo de tal laicismo, confundiendo, sin duda, una prohibición de la Iglesia de la época basada en equivocadas apreciaciones moralistas con un programa educativo meramente progresista, respetara o no la materia religiosa, tal punto no era otro que la coeducación.

"Su contenido es eminentemente laico y ha de permitir en lo sucesivo el establecimiento de otras leyes que vigoricen este laicismo, tales como la coeducación, que ya se lleva a la práctica."

Acababa el redactor de este suelto señalando que una vez consignados estos hechos se abstenia de realizar comentario alguno, limitándose a recordar a los fieles que las puertas del infierno no prevalecerían contra la

Iglesia. (229)

Dos fechas se avecinaban que todos los años propiciaban las palabras de los obispos a sus fieles en forma de pastorales sobre ellas: el Adviento y la festividad de la Inmaculada Concepción, y que, dadas las circunstancias del momento, era de esperar contuvieran los lógicos comentarios y orientaciones. No sería esto así, sin embargo y, salvo contadas excepciones, como seguidamente veremos, los distintos prelados se limitaron a suscribir documentos de contenido puramente religioso que, a lo sumo, encerraban alguna frase enjuiciando la situación general de España. Causa probable de esta actitud sería el acuerdo adoptado en la conferencia de metropolitanos de publicar un documento colectivo sobre la Constitución.

Como ejemplo de lo que antecede y dejando a un lado los escritos de la jerarquía de contenido estrictamente piadoso, podemos aludir a la pastoral de 15 de noviembre de 1931 del Dr. Adolfo PÉREZ MUÑOZ, obispo de Córdoba, tratando conjuntamente del Adviento y de la Inmaculada, pastoral en la que sólo aparecen frases genéricas y metafóricas sobre el momento relativas a los "furiosos vendavales" que azotaban a la sociedad española, ante los que preciso era elevar fervientes oraciones para que Dios "venga en nuestro auxilio y despeje el cielo de las negras nubes que cierran nuestro horizonte". Con independencia de estas palabras tan solo al referirse a su intención de celebrar peregrinaciones a los santuarios de la diócesis señalaría el prelado que

(229) f.f. "Crónica General.- Beati qui persecutionem patiuntur", BDE de Palencia, año 81, 31 de octubre de 1931, núm. 23, pág. 709.

"acontecimientos de todos bien conocidos -y por los fieles cristianos nunca bastante lamentados-" le obligaban a desistir de esta idea.⁽²³⁰⁾

Este mismo tema sería reiterado por el obispo de Palencia, Dr. Agustín PARRADO GARCÍA, en su pastoral sobre la Inmaculada, en la que indicaba que "las tristísimas circunstancias en que se ha desenvuelto la vida religiosa en España" desde el mes de abril, en que habló a sus diocesanos sobre el Concilio de Ereso,⁽²³¹⁾ habían impedido celebrar su conmemoración en la debida forma, habiéndose visto precisado a suspender los proyectos de procesiones públicas o peregrinaciones. Ello era una prueba que, junto a otras, "nos han venido con el actual estado de cosas en nuestra querida patria" y que la providencia les enviaba para purificarles, lo que les debía hacer corresponder mejorando su religiosidad interna para suplir "las manifestaciones externas que se nos impiden, o de que el buen consejo de prudencia dicta nos abstenamos para evitar mayores males", por lo que invitaba a los fieles a acrecentar su piedad y a orar en la festividad de la Virgen "por nuestra querida desventurada Patria... que en estos días tristes y tormentosos tanto necesita de su eficaz Patrocinio."⁽²³²⁾

(230) 15 de noviembre de 1931, "Exhortación pastoral", BOE de Córdoba, año 74, 21 de noviembre de 1931, núm. 15, págs. 259-267.

(231) Ver la nota 18 del capítulo "La Iglesia ante la República".

(232) 24 de noviembre de 1931, "La fiesta de la Inmaculada", BOE de Palencia, año 81, 1 de diciembre de 1931, núm. 25. No dejan de contrastar las quejas del Dr. PARRADO sobre la no celebración de actos externos de culto con motivo de la conmemoración del concilio de Ereso, con las reseñas del boletín eclesástico de la diócesis sobre otros actos celebrados a lo largo del año, tal como hemos recogido en el capítulo anterior, singularmente en su nota 88.

Ya hemos aludido a la pastoral suscrita el 21 de noviembre por el obispo de Barcelona Dr. IRURITA ⁽²³³⁾ para tratar del Adviento, pastoral que, como hemos señalado, aprovecharía para aludir a la encíclica del papa sobre la cuestión social y en la que también se referiría al telegrama pontificio protestando por la situación de España, referencia que el obispo acompañaría de su propio juicio sobre tal situación con durísimos epítetos contra las autoridades civiles.

Recordaba así el prelado las palabras del telegrama del papa y, tras aludir al juicio divino sobre justos e injustos, pasaba a reconvenir a los prohombres de la República para que corrigieran su forma de actuar. El estilo del Dr. IRURITA para formular sus advertencias nada tiene que ver con la comprensión en las actitudes de algunos cuyas obras podían ir contra la religión, tal como hemos visto esbozada en el suelto publicado en el boletín eclesiástico de Palencia ni, desde luego, con la serena protesta formulada por la Santa Sede. Creemos que merece la pena transcribirlas con la debida extensión, tanto por sus condenas sin paliativos como por sus referencias implícitas a la Constitución:

"¡Oh pecadores! Dejad ahora esos senderos del mal, arrepentios ahora que estais a tiempo, porque entonces sera ya tarde. ¡Oh politicos impios! No os levanteis contra Dios, porque Dios entonces os aplastará y quebrará como vaso de barro. No guerreéis contra Cristo y su Iglesia, no persigais su reino en la familia por el divorcio y el amor libre, en la escuela por la enseñanza laica, en la sociedad por leyes impías... pues ha de llegar un día, en que habreis de comparecer ante ese Rey victorioso, Juez de vivos y muertos, el cual tomará venganza de vosotros, arrojándoos por los despeñaderos del infierno.

(233) Ver el epígrafe "El tratamiento de la cuestión social en 1931" del capítulo anterior.

«Escuchad, oh gobernantes, y estad atentos; aprended vosotros, oh jueces todos de la tierra... Porque la potestad os la ha dado el Señor; del Altísimo teneis esa fuerza; el cual examinará vuestras obras, y escudriñará hasta los pensamientos. Porque siendo vosotros unos ministros de su reino universal, no juzgasteis con rectitud, ni observasteis la ley de la justicia, ni procedisteis conforme a la voluntad de Dios. El se dejara ver sobre vosotros espantosa y repentinamente: pues aquellos que ejercen potestad sobre otros serán juzgados con extremo rigor...»

Tras estas drásticas invectivas contra los políticos no dejaba de aprovechar el obispo la ocasión para exhortar a los fieles a su participación en la campaña revisionista, a la que se refería con gran entusiasmo y esperanza:

"Estad alerta, velad... Vemos con gran satisfacción el generoso movimiento de protesta y de revisión, que se ha levantado entre vosotros, para reparar los daños causados a la Iglesia y evitar otros nuevos; y deseamos vivamente que ese movimiento se acreciente, empleando con energía todos los medios lícitos, como nos dice el Santo Padre."

Para lograr este fin no quería el prelado que los católicos se mezclaran con partidos políticos porque pudieran no enarbolar la bandera de la confesionalidad o no reivindicar la total transformación de lo hecho. Los creyentes debían luchar por la reparación total, y tal lucha debía fundamentarse, lejos de la realidad social del distinto juego de las ideologías, bajo la bandera de la Iglesia y con los solos principios espirituales. Así, sin hacer mención expresa a qué fuerzas se refería, pero negando la virtualidad operativa para el fin al que exhortaba de lo que llamaba "la armería democrática", añadía:

"Pero vemos también, y no sin recelo y gran temor, que se trata de torcer el curso de ese movimiento, proponiéndose programas truncados e invitando a formar en partidos neutros, en ciertos partidos de orden, con que solo podría lograrse suavizar algun

tanto las heridas, sin cicatrizarlas, sin evitar, ni mucho menos, irreparables consecuencias para el porvenir. Antigua es esta táctica, que siempre ha fracasado.

...

«Por tanto, lo que a vosotros toca, católicos de acción, es emplear todas vuestras energías para llevar los pueblos a la Iglesia Católica; ésta los someterá a Cristo y Cristo a Dios... Defended vosotros sus derechos íntegramente, bizarramente, y dejad confiadamente a la Santa Sede el negocio delicado de concretar sus relaciones con los Estados.

«Nada de transacciones ni pactos con el error, nada de neutralidades en una lucha, en que se juegan los intereses eternos de la Iglesia, que son los intereses de la gloria de Dios y de las almas. El partido neutro no existe en la causa de Dios...

«Luchad, por tanto, en esta gran batalla espiritual, frente por frente al adversario, con mucha caridad, sí, pero también con mucha intransigencia en cuanto a los principios. Luchad con vivas energías, con armas bien templadas. Y en esto, debemos lamentar que se vayan a sacar esas armas, con preferencia, de la armería democrática; sacadlas mejor de nuestra armería propia, del Santo Evangelio. No lucheis con cañas; luchad con armas aceradas, exponiendo los argumentos metafísicos, las razones de orden sobrenatural, basadas en los derechos de un Dios Creador, Redentor y eterno Remunerador.» (234)

Más explícito aun en su referencia a la Constitución sería el exilado obispo de Málaga, Dr. Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, que el 25 de noviembre suscribiría una pastoral, publicada como texto único en un número extraordinario del boletín eclesiástico de la diócesis, no para hablar, como en los restantes casos, de las festividades eclesiásticas del momento, sino para referirse

(234) 21 de noviembre de 1931, "Carta pastoral de Adviento que su Excmo. Reverendísima dirige al Clero y fieles de la Diócesis: Ante el Tribunal de Cristo". BDE de Barcelona, año 74, 21 de noviembre de 1931, núm. 21, págs. 618-632.

expresamente a la situación de España, de ahí que su pastoral se estructurara en tres grandes apartados para responder a las demandas de sus fieles respecto a su pensamiento sobre "la hora presente de persecución y de las horas venideras": "de protesta"; "de condolencia"; "de confianza".

Iniciaba el prelado su protesta aludiendo concretamente a las disposiciones constitucionales contra las que invitaba a todos sus diocesanos a luchar por todas las vías legítimas, ya que, si bien había predicado en un primer momento, como el resto del episcopado, el acatamiento a los poderes constituidos, no entraba en el la obediencia a unas normas que iban contra Dios. Se refería así el obispo a

"...la acordada en Cortes y comenzada a perpetrarse expulsión de Dios del Estado español y de sus leyes, del hogar y de la escuela. Protesto contra la conculcación de los sacrosantos derechos y merecimientos de la Iglesia católica, alma y vida de España y de su historia, contra el despojo de sus bienes, contra el hambre a la que se condena a sus Sacerdotes, contra la disolución y confiscación con que se amenaza a las niñas de sus ojos, que son sus religiosos y religiosas, y contra la particular saña con que se persigue a la meritisima Compañía de Jesús, a la que tanto deben en el orden espiritual, cultural y de beneficencia la Patria y la Diócesis... y protesto... para que así mismo protestéis todos los que de mí dependáis y de todas las maneras lícitas, ahora y mientras estén en pie esas ofensas y no se dé de ellas la reparación debida a todos y a cada uno de los injustamente perjudicados.

"acatamiento voluntario y razonable a los poderes constituidos y sumisión a sus disposiciones en favor del bien común, hemos predicado lealmente y seguiremos predicando los Obispos a nuestros pueblos; pero en ese acatamiento y sumisión no entran la obediencia a las leyes contra Dios, que por lo mismo no son leyes, ni la aceptación de la apostasía, ni la complicidad en la desecristianización y ruina de la Patria."

Serian sus proximas palabras, como habia anunciado, de condolencia por "todos mis queridos y venerados perseguidos", aludiendo a la pobreza que aguardaba a los sacerdotes "singularmente en estos primeros tiempos de despojo mientras nuestros fieles no acaban de enterarse de que no coméis mas pan que el que os den su caridad y su desprendimiento para con su Madre la Iglesia""", pero sin dejar de recordar especialmente a la Compania de Jesus asi como al resto de las ordenes religiosas, que, "si se consuman los planes de impiedad" serian arrancadas del lado de todos los desvalidos por los que tanto habian velado. Se condolia pues, con todos ellos y ofrecia a sus sacerdotes lo que de el pudieran necesitar.

Por ultimo se referia el prelado a la confianza, pese a la situacion vivida, ya que todo cuanto sucedia no era mas que una prueba enviada por Dios:

"Que nadie se me escandalice, si digo que esta persecucion que se ha desencadenado en nuestra España contra los templos y los Sacerdotes catolicos, contra las instituciones mas queridas de la Iglesia, como son las ordenes religiosas, la escuela catolica y el hogar cristiano y con esas persecuciones todas las amenazas que, como nubarrones muy negros, se ciernen sobre la Patria, son hechas con poder de Dios."

Pero los que tales acciones ejecutaban debian recordar que "no podran impedir ni un adarme del bien, del gran bien que el poder de Dios quiere sacar de sus furias perseguidoras". Por ello nadie podia quitar a los creyentes su esperanza, esperanza activa, pero no en el orden temporal, como tanto habia insistido el Dr. IRURITA, sino en un plano puramente espiritual, con una postura coherente con la siempre seguida por el Dr. GONZÁLEZ

"...ese esperar en paz, no es esperar sentados y cruzados de brazos en una estéril inacción y

cerrados los ojos para no ver los males que nos rodean, sino que es *esperar andando*²³⁶, esto es, seguir cumpliendo cada cual con su deber como mejor y mas rectamente pueda y con todo su deber, el deber para con Dios, para con los hombres y la Patria y consigo mismo."

En forma de actuar, añadiría el prelado, traería triunfos inesperados, singularmente en el ámbito sacerdotal, donde el exacto cumplimiento de las obligaciones pastorales "atraería sobre vuestras parroquias, vuestros ministerios y aun vuestra subsistencia económica toda clase de abundancias..."

Y, tras insistir en la necesidad de orar sin descanso, concluiría el obispo invocando a todos los santos patronos de España a fin de que abreviaran "la hora de la purificación y aceleren la del triunfo" de la Iglesia; "triunfo" que pedía y justificaba en base a que ella sólo pretendía hacer el bien a toda la sociedad, de acuerdo con su fe:

"¡El triunfo por la libertad!²³⁷ Que no se tape la boca a la Iglesia para enseñar y predicar la verdad, ni se le amarren las manos para hacer el bien, ni se le sujeten los pies para dar culto a Dios y a sus Santos en calles y plazas... libertad para vengarse²³⁸ de sus enemigos perdonándolos perdonándolos... ¡Libertad para la Madre Iglesia! que nadie le impida tomar de la mano a las puertas del Baptisterio a sus hijos y llevarlos a través del culto y la jerarquía, de la escuela cristiana, del hogar cristiano y de las obras cristianas de educación, preservación y defensa a las mismas puertas del cielo!"²³⁹

Nuevamente insistiría el Dr. GONZALEZ en dirigirse a sus diocesanos, ya en el mes de diciembre, con el propósito de, partiendo de una descripción de lo que él entendía era

(236) En bastardilla en el original.

(237) 25 de noviembre de 1931, 'Carta Pastoral de nuestro Rvdo. Páido', BOE de Málaga, año 64, 28 de noviembre de 1931, núm. 13, (extraordinario).

la situación de España, exhortarles a la ayuda al clero. Hacia esto el prelado mediante un documento estructurado en esta ocasión en dos partes: "En desagravio de mi Madre" y "Modos de cumplir el quinto Mandamiento de la Santa Madre Iglesia".

En la primera presentaba el prelado la fórmula idónea que tenían los católicos de efectuar tal desagravio, dada la persecución que la Iglesia estaba sufriendo en España; tal fórmula constaba de tres puntos: por el primero el católico había de mantener su total adhesión a la jerarquía, ser firme en la fe, cumplir los mandamientos, rezar y recibir con frecuencia los sacramentos; por el segundo había de protestar energicamente "y por todos los medios lícitos" contra los despojos de que se estaba haciendo víctima a la Iglesia,

"...no solo privándola de sus bienes materiales y de sus instituciones más queridas, como las ordenes Religiosas, sino echándola de la vida oficial y pública, por el ateísmo del Estado; de la familia, por el matrimonio civil y el divorcio; de la escuela, por el laicismo oficial; de las tumbas de los cristianos, por la secularización de los cementerios; de las ideas y de los sentimientos del pueblo y de las relaciones sociales, por el desenfreno de propaganda oral y escrita contra la Religión, la Moral, la Propiedad privada y hasta contra las vidas de los ciudadanos."

Por el tercer punto, los católicos habían de tener por la Iglesia "amor hasta el sacrificio" al ser ella su madre sobrenatural de la que recibían todos los bienes espirituales. Tal sacrificio había de demostrarse en lo económico, con el desprendimiento de los gastos superfluos y aun de las necesidades menos urgentes, dando dinero para el sostenimiento del culto y del clero así como de las instituciones de enseñanza y caridad.

Este sacrificio tambien habia de radicar en "el celo por el catecismo", estudiándolo, enseñándolo y difundiendo y, especialmente, en el valor, "dando la cara varonilmente por Cristo y por su Doctrina", actitud que el prelado centraba especialmente en las cortapisas a la propaganda anticatolica y en el apoyo a la prensa aprobada por la Iglesia, amen del voto correcto en las inmediatas elecciones, sin dejar de dividir una generica condena de las costumbres "paganas". El valor de los catolicos habia, pues, de luchar

"...por su Sacerdotes, sus templos y sus Instituciones, combatiendo la prensa que combate a la Iglesia, restándole suscriptores, lectores, anunciantes y toda clase de apoyo y fomentando con mi dinero y mi propaganda los periodicos aprobados por Ella, y usando debidamente de mi voto en las elecciones, ahuyentando sin cansancio y en todas las formas que pueda la invasión pagana, que va entrando aun en los catolicos, de modas, diversiones, espectaculos y practicas reprobadas por el Papa y los Obispos, y que hace más estragos en la sociedad, en la familia y en las almas que la mas fiera revolucion comunista."

La segunda parte del documento, basándose en la que calificaba como ruptura violenta por el Estado del pacto con la Iglesia y en la supresión de parte del presupuesto eclesiástico, indicaba las formas en que los fieles podian cumplir con el deber de sustituir este presupuesto.⁽²³⁸⁾

Con excepcion de los hasta aqui examinado no hemos encontrado otros pronunciamientos individuales de los obispos sobre la Constitucion recién aprobada. Los ultimos documentos que cabe encuadrar en este epigrafe finalizando

(238) ver "Frente la persecución". BOE de Málaga, año 64, diciembre de '931, num. 16, págs. 416-421

1931 y a comienzos de 1932 son los relativos a la difusión dada por los boletines eclesiásticos a las palabras pronunciadas por el papa en el discurso de respuesta al colegio cardenalicio con motivo de la felicitación navideña en las que, como ya hemos señalado, antes de elogiar la actuación del cardenal SEGURA, había tenido amargas frases sobre la situación de la Iglesia en España tras la aprobación de la Constitución.⁽²³⁹⁾

(239) Ver la nota 351 del capítulo "La Iglesia ante la República".

10. El viaje de los Dres. CARRERAS Y VILAPLANA al Vaticano.

A pesar de las detalladas cartas cursadas por VIDAL al Secretario de Estado vaticano dándole cuenta de la marcha de los acontecimientos en España, tenía este sumo interés en que la Santa Sede contara con una información exhaustiva de los hechos.

A este interés se sumaba el del nuncio TEDESCHINI que consideraba de gran utilidad que la Santa Sede comprendiera la necesidad de contar con un embajador de la República en el Vaticano, puesto para el que recomendaba a Luis de ZULUETA (240).

Fruto de tales intereses sería el acuerdo adoptado por el nuncio y secundado por el cardenal de enviar a Roma a los sacerdotes CARRERAS y VILAPLANA, asiduos colaboradores de ambos durante los debates del proyecto de constitución, para que, mediante las oportunas entrevistas con los más altos miembros de la curia romana y los oportunos informes expusieran pormenorizadamente no solo los acontecimientos habidos, sino también el caldo de cultivo en que en aquellos momentos se movía la sociedad española y las perspectivas que, según todo ello, cabía esperar del porvenir.

(240) Ver la nota 187 del capítulo "La Iglesia ante la República".

Cumpliendo estas ordenes partieron ambos a finales de octubre permaneciendo en Roma hasta el 7 de noviembre, periodo durante el que, aparte de con el Secretario de Estado vaticano, se entrevistarían con el secretario para asuntos extraordinarios, monseñor PIZZARDO, los padres LEDOCHOWSKI y CALDENTY (generales de los jesuitas y de los teatinos) y otras relevantes personalidades vaticanas, redactando, al tiempo, extensos informes para el oportuno desarrollo de tales entrevistas.

Con independencia de la publicación íntegra de tales informes, a parte de cuyo contenido ya nos hemos referido,⁽²⁴¹⁾ Battilori y Arbeloa dan una detallada descripción de la labor de ambos sacerdotes en Roma en la *Introducción* al tomo segundo del *Arxiu Vidal i Barraquer*, razón por la que nos remitimos a dicha obra,⁽²⁴²⁾ limitándonos aquí a resaltar las materias más relevantes en lo que afecta a los debates y ulterior aprobación de la Constitución.

Uno de los más importantes informes de los Dres. CARRERAS y VILAPLANA describía la situación social del catolicismo español y de las ideologías contrarias a él aparecidas desde principios de siglo, apoyándose en la evolución habida desde entonces en una y otra corriente explicaban los sacerdotes la aprobación del artículo veintiseis de la Constitución. Tras el cual, puntualizaban, la Iglesia precisaba avanzar "organizando la Acción Católica, resolviendo el problema económico, que crea la supresión del presupuesto del Estado para el culto y clero, reforzando la prensa católica y la enseñanza cristiana,

(241) Ver las notas 140 y 197 del capítulo "La Iglesia ante la República".

(242) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, págs. 31-35 y 55-105.

procurando la union de los catolicos por encima de todo partidismo, con los procedimientos seguidos hasta ahora por la nunciatura y la jerarquia..."

Partiendo de tales premisas, consideraban los sacerdotes que no convenia tomar actitudes practicas de protesta ni de oposicion, ni debian tampoco retirarse definitivamente los diputados catolicos del parlamento. Afirmando que no parecia "suficientemente fundada la sospecha de muchos de que la ley de defensa de la Republica va dirigida contra los catolicos". Sin embargo la jerarquia y otras personalidades politicas catolicas, eran favorables a reanudar los contactos con el gobierno -"sin paralizar, con todo, el movimiento espontaneo de protesta y de revision tal como se han manifestado hasta ahora"-, ya que ello no excluia un bien mayor, sino que, incluso, podia favorecerlo.

Por otra parte, la persecucion que se habia desencadenado solo podria ser contrapesada si toda la responsabilidad recaia sobre la Republica, unica forma de que "la simpatia y los esfuerzos de la masa neutra y de toda conciencia honesta se sumaran a ayudar a los catolicos a tolerarla, y aun a superar, con exito mas o menos rapido, pero seguro".

Ademas, aun en el caso, "no imprevisible ciertamente", de una agravacion del radicalismo, si la Iglesia hubiese de reaccionar, una renovacion de contactos la prepararia mejor para resistir "y para presentarla, tanto en el interior como en el exterior, con mayor prestigio, y con mayor eficacia para una victoria posterior."

Hecha esta descripcion de las causas que, a juicio de los sacerdotes, habian propiciado la votacion de las

constituyentes y de los caminos que juzgaban oportuno seguir, pasaban a describir la ideología dominante en los distintos miembros del gobierno, eminentemente radical, según ellos, mas al que la situación económica y social y "el temible avance del comunismo, muy superior a cuanto se supone, promovido en España por Moscú", llevaban a augurar actuaciones de mayor moderación, de lo que era ejemplo la propuesta de AZANA de reaunudar los contactos de la Iglesia. Pese a ello habia, desde luego, una dificultad insoslayable y era la relativa a la ejecución del artículo veintiseis de la Constitución en lo que atañía a la disolución de la Compañía de Jesús.

En subsiguientes entrevistas e informes tratarían también los Dres. CARRERAS y VILAPLANA del problema económico que se creaba a la Iglesia de España con la supresión del presupuesto del culto y clero; sobre la posible elevación de ALCALA ZAMORA a la presidencia de la República; sobre el futuro de la nunciatura en España y sobre los bienes de la Compañía de Jesús.

Al comentar estas memorias y entrevistas señalan BATLLORI y ARELLANO que el cardenal VIDAL, despues de leer las palabras de los sacerdotes, indicaría a PACELLI que estos habian interpretado exactamente la misión que les habia sido encomendada.***

11. La conferencia de metropolitanos de noviembre de 1931.

Mientras estas entrevistas y los pronunciamientos vistos de los obispos iban teniendo lugar y tal como el cardenal VIDAL habia anunciado al Secretario de Estado vaticano en su carta del 22 de octubre, habia procedido a convocar la conferencia de metropolitanos de 1931, redactando previamente los puntos que consideraba oportuno que fueran debatidos en la misma a fin de que las distintas provincias eclesiásticas dieran su parecer sobre ellos o propusieran matizaciones, supresiones o añadidos a los mismos; resultando de ello que los siete puntos inicialmente previstos por el cardenal aumentarían hasta quince.

Una vez aprobados los temas a debatir VIDAL los remitiría nuevamente a los arzobispos a fin de que convocaran sus respectivas conferencias episcopales y, en el seno de las mismas, los obispos aportarían su opinión en las distintas materias para su examen y aprobación definitiva por la conferencia de metropolitanos.

Tanto los puntos propuestos en esta ocasión por el arzobispo de Tarragona como los incluidos a petición de las distintas provincias eclesiásticas tenían mucho que ver, como es lógico, con el futuro inmediato que se presentaba a la Iglesia española.⁽²⁴⁴⁾

(244) Tales puntos, a parte de los cuales nos referimos en los distintos capítulos de este trabajo, serían:

I. Nuevo Sumario de la Bula de Cruzada.- modificaciones que deberán introducirse y gracias que podrían pedirse para convertirla en uno de los medios adecuados para el sostenimiento del Culto y de los Seminarios.

Sobre estos puntos nos interesa destacar aquí los relativos a la publicación de un nuevo documento por el episcopado español y el relativo a la visita que debían efectuar a AZAMA los arzobispos de Sevilla y Iaragona.

Respecto al primero la conferencia acordaría que

"...una vez promulgada la Constitución, se publique un Documento colectivo del Episcopado, en el que se proteste de las ofensas inheridas a la Iglesia, principalmente de los últimos artículos

II. Seminarios Conciliares; ejecución del Decreto de la Sda. Congregación de Seminarios.

III. Situación del Colegio Español.

IV. Organización Católica.- Bases para la misma a fin de lograr la unidad y continuidad respetando debidamente la autonomía. ¿Conviene que los Sindicatos profesionales y la Confederación Agraria queden encuadradas dentro de la Acción Católica tal como está hoy definida?

V. Prensa Asociada.- Aumento del capital; organización definitiva y técnica de una Agencia.

VI. ¿Conviene una nueva protesta contra las ofensas hechas a la Iglesia, después del Mensaje del papa y de la contestación al mismo del Episcopado Español?

VII. Defensa de las órdenes Religiosas, especialmente de la Compañía de Jesús.

VIII. Sobre Prensa Católica.

IX. Intensificación de la enseñanza del Cleroismo.

X. Escuela Parroquial.

XI. Letrado Asesor.

XII. Aranceles de Curia.

XIII. Medios para suplir el Presupuesto de Culto y Clero.

XIV. Bienes de la Iglesia Española.

IV. *Visita de los cardenales ILUNDAIN y VIDAL I BARRAQUER al presidente del gobierno. (Punto acordado en la misma conferencia de metropolitanos)*

referentes a la Escuela laica, divorcio, ordenes Religiosas, contribución sobre las Iglesias, Seminarios, Conventos, Palacios Episcopales y Casas Rectorales y ordenes Religiosas.

«Además, aprovechando la próxima fiesta de la Inmaculada u otras festividades, se excitara a los fieles a que intensifiquen el culto religioso, promoviendo peregrinaciones a Santuarios en los que se veneren imágenes a las que se profesa gran devoción,²⁴⁵ inculcándoles la necesidad que tenemos de la oración...»

Fruto de este acuerdo, como seguidamente veremos, seria el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931, en el que la jerarquía daba a conocer a los fieles españoles su parecer sobre la recién aprobada Constitución.

El otro punto relevante a nuestros efectos seria el acuerdo de que los dos cardenales antes citados visitaran al presidente del Gobierno. Extremo este que tendria su relevancia por cuanto una de las manifestaciones efectuadas por VIDAL al cardenal Secretario de Estado vaticano por carta del mes de octubre que, al parecer, fue llevada por CARRERAS y VILAPLANA en su viaje a Roma, habia sido la del acuerdo adoptado por la comision de metropolitanos, una vez votado el articulo veintiseis de la Constitución, de abstenerse de toda relacion con el gobierno, mision que, desde ese momento, quedaba reservada a las usuales

(245) Si la conferencia de metropolitanos, consciente de la situación que se vivia en las distintas provincias eclesísticas aprobó este tipo de exhortación, cuando, como antes hemos visto, hubo prelados, que queriendo secundar estas iniciativas, desistirian de ella por temor a las circunstancias, lo haria en base a un expreso deseo del papa, como seguidamente veremos. No obstante, en muchos puntos de España pudieron realizarse estas manifestaciones, como sucederia con las peregrinaciones al santuario de Montserrat, de las que el cardenal VIDAL da cuenta al papa en su felicitación navideña de 1931. (Op. cit. págs. 191-193).

competencias del nuncio. Sin embargo AZAÑA había hecho llegar a VIDAL su parecer contrario a esta actitud,⁽²⁴⁶⁾ tal como hemos visto exponrían los mencionados sacerdotes al Vaticano. Tal impresión y el interés de los cardenales españoles en salvar a toda costa las relaciones entre Iglesia y Estado - al que ya se había adelantado indudablemente VIDAL que, en esa actuación suya tan distinta a la seguida por el cardenal SEGURA, se había apresurado a comunicar a AZAÑA su desplazamiento a Madrid para la celebración de la conferencia⁽²⁴⁷⁾ motivaría, sin duda, el acuerdo sobre la visita indicada.

Tal acuerdo venía definido por los concretos parametros de manifestarle "la honda pena y profunda amargura del Episcopado, Clero y fieles por las últimas disposiciones del Poder civil que tanto han herido los sentimientos religiosos". Estas disposiciones, concretamente enumeradas en el acta de la conferencia, con un estilo nada homogéneo y que, como en la generalidad de los puntos tratados en ella, se referían en muchos de sus casos a cuestiones derivadas de la situación económica con que habría de enfrentarse la Iglesia, eran las siguientes:

"a) supresión desde el mes actual de la asignación de los Economos; b) denegación de efectos civiles a las sentencias de los Tribunales eclesiásticos en

(246) *Esglesia i Estat durant la segona...* II, págg. 55-56, nota 1.

(247) Op. cit., pág. 109. Sobre la reanudación de las relaciones entre la Iglesia y el gobierno se dieron, empero, posturas dispares. Así, el obispo de Urgel, Dr. Justino GUITAR, al escribir a VIDAL el 5 de diciembre, tratando de la próxima promulgación de la Constitución le indicaba que creía oportuno "ante los próximos acontecimientos políticos," habían de ser consecuentes con la acordada separación de ambas potestades, y, por tanto "Nada de telegramas, ni colgaduras, aunque alguien trate de imponerlas, como podría muy bien sucederme aquí". Por el editorial de "El Debate" a que más adelante nos referiremos, sobre la fiesta de la Constitución, no parece, desde luego, que la Iglesia se sumara a ella; no obstante no actuaria, que sepamos, igual, en relación con los

las causas matrimoniales; c) aflictiva situación del Sr. Obispo de Vitoria, a quien se la ha impuesto la pena de destierro y la privación de las temporalidades, sin motivo para ello, lo propio que la de varios Prelados que no pueden residir en sus Sedes; d) derogación del decreto prohibiendo enajenar bienes eclesiásticos; e) situación de los Profesores de Seminarios que percibían sus honorarios con cargo a la subvención que el Estado tenía consignada en los Presupuestos para dichos establecimientos; f) en la misma situación se encuentran los Capellanes de Monjas a quienes desde primero de año se suprimía lo que percibían del Estado; g) concesión de libertad para abrir y actuar las escuelas católicas, protestando del rigor con que son tratadas por algunos Inspectores; h) exención de tributos a edificios eclesiásticos, Templos, Palacios Episcopales, Casas rectorales, Seminarios, etc."⁽²⁴⁸⁾

Tal como consta en el archivo de VIDAL, con independencia de la nota entregada al mismo AZANA como resumen de estos puntos, fue en esta ocasión el cardenal ILUNDAIN el que se encargaría de realizar el resumen del resultado obtenido en tal entrevista al objeto de trasladarla a Roma, cosa que haría VIDAL por carta remitida al Secretario de Estado vaticano el 28 de noviembre de 1931 y a la que mas adelante aludiremos.

Telegramas cursados a las autoridades políticas con motivo de su nombramiento. Así nos consta, al menos, del arzobispo de Burgos, que el 11 de diciembre comunicaba al de Iaragona que pensaba telegrafiar al nuevo presidente, ya que "lo valiente no quita lo cortés" y lo propio haría el cardenal VIDAL, tanto con el mismo ALCALA ZAMORA como con ZULUETA y CARNER, sin dejar de recordar a los tres la necesidad de encontrar soluciones armónicas para el devenir de la Iglesia en España, Op. cit., págs. 252, nota 2; 254-256 y 278-279, postura también mantenida, aunque con mucha mayor sutileza en un acto que no tenía la intisidad de unas cartas, en el discurso pronunciado, como decano, por el nuncio TEDESCHINI en la recepción del cuerpo diplomático por el nuevo presidente de la República el 12 de diciembre de 1931 (Op. cit., págs. 256-257, nota 24).

(248) Op. cit., págs. 116-119.

De estas gestiones deducen BATLLORI y ARBELOA que las mismas harían ver al Secretario de Estado vaticano que no era solo el cardenal VIDAL quien deseaba no cortar las relaciones con el gobierno.⁽²⁴⁹⁾ Y no cabe duda que esta intención dió sus frutos, aunque fueran parciales, tal como el propio VIDAL comunicaría a los metropolitanos a los cinco días de celebrada la entrevista, antes de regresar a Tarragona.

En el desarrollo de dicha entrevista, tal como fue precisado por ILUNDAIN, los cardenales se habían limitado a ampliar al presidente el contenido de los puntos aprobados por la conferencia de metropolitanos sin incluir ningún nuevo aspecto, y a ellos, según indicaba el arzobispo de SEVILLA, había respondido AZANA "que se hacía cargo de lo razonable de alguna de nuestras quejas, y que interpondría su influencia para que fuesen atendidos nuestros ruegos en lo posible."⁽²⁵⁰⁾ La conclusión de esta nota, cara al Vaticano, no podía ser más favorable respecto a la apreciación eclesiástica del nuevo gobierno, y no parece que ello fuera consecuencia de un deseo del cardenal ILUNDAIN de enfocar positivamente las cosas -no podemos olvidar aquí ni las frases de AZANA en el Parlamento ni sus declaraciones sobre la Iglesia a que antes nos hemos referido- sino el resultado real y más o menos cordial de la entrevista, tal como también se deduce de la afirmación del colaborador de los cardenales, Dr. VILADRICH, de que nos dan cuenta BATLLORI y ARBELOA al expresar al vicario general de Tarragona, Dr. BORRAS, que el presidente había estado "frío, pero muy atento".⁽²⁵¹⁾

(249) *Església i Estat durant la segona...*, II, pág. 11.

(250) En bastardilla en el original.

(251) *Ibidem*.

Concluía, pues, así la nota del Dr. ILUNDAIN:

"Dijo también el Sr. Presidente que, a juicio suyo, no se empeorara la situación religiosa de la Iglesia, sino que, pasado este periodo constitutivo del nuevo régimen, en el que no ha sido posible evitar cierta efervescencia y extremismo, se suavizara y mejorara la actual situación de la Iglesia, pues esta es la época mas dura y crítica para ella. El Presidente insistió en estas afirmaciones; pero no concreto soluciones ni remedios. Al terminar la entrevista, hicieron los Sres. Cardenales manifestaciones de acatamiento al Poder constituido, y deseos de que renazca la paz y armonía del Estado y la Iglesia para el bien de ambas sociedades. El Sr. Presidente agradeció estos sentimientos y ofreció sus servicios."⁽²⁵²⁾

Mas no solo las frases del cardenal ILUNDAIN y del Dr. VILADRICH atestiguan en esta ocasión la buena disposición del gobierno. Como ya hemos indicado, las gestiones de los cardenales dieron parcialmente sus frutos, singularmente en la que atañía a los mas relevantes aspectos economicos relacionados con la inclusión de los eclesiasticos en el presupuesto y, así, tras diversas comunicaciones con el ministro de Justicia, fueron rectificadas las cuestiones relativas al presupuesto de los economos y al clero conventual.⁽²⁵³⁾ No así en el caso de la aplicación de las medidas secularizadoras, cuyo tratamiento es el objeto de esta tesis, sobre lo que no hubo modificación alguna por parte del gobierno en las disposiciones dictadas antes de la aprobación definitiva de la Constitución.

(252) Op. cit., II, págs. 179-180.

(253) Op. cit. págs. 162-163 y 181-185.

Todas estas gestiones serian comunicadas nuevamente por VIDAL al Secretario de Estado vaticano en uno de sus extensos y relevantes despachos, esta vez fechado el 28 de noviembre de 1931, y en el que, además, le daba detallada cuenta de la celebracion de la conferencia de metropolitanos y de la situacion en España en visperas de la aprobacion de la Constitucion.

Respecto a los hitos de la conferencia destacaria VIDAL al Secretario de Estado sus aspectos mas importantes. Así, en lo relativo a la organizacion de la Acción Católica le indicaria, entre otros detalles de caracter interno de esta rama seglar de la Iglesia, que los metropolitanos habian tenido en cuenta las directrices transmitidas por la Santa Sede, habiendose tratado en las bases propuestas por los metropolitanos de "la más rigida eliminacion de toda posible infiltracion politica, que impone la naturaleza de la Acción Católica y aun la extrema susceptibilidad del regimen actual". También hablaria el cardenal de la espinosa cuestion de la supresion del presupuesto del culto y clero y de las previsiones adoptadas por los arzobispos, remitiendo copia de los documentos derivados de las gestiones efectuadas cerca del gobierno.

Con independencia de estos extremos tambien trataria el cardenal del movimiento revisionista, informando de que los metropolitanos habian obtenido datos reservados sobre su desarrollo, principalmente a traves de GIL ROBLES "el verdadero lider del mismo, considerado dentro y fuera de España como el mayor valor de los parlamentarios catolicos". Siguiendo en sus ideas sobre los posibles frutos de esta campaña, se decantaba ahora VIDAL por la mas factible solucion -ya apuntada en su anterior carta como uno de los intereses de los parlamentarios aunque en aquellas fechas la entendiara menos viable-, de lograr la inclusion en el texto

constitucional de unos artículos adicionales que posibilitaran su revisión:

"Visto claramente que la eficacia de la campaña revisionista no podía tener resultados concretos de una revisión inmediata de la Constitución antes de que ésta fuera promulgada, creímos deber nuestro fomentar reservadamente lo que era dable alcanzar, o sea: a) artículos adicionales a la misma atenuadores del artículo 24; ²²⁴ b) modificación del dictamen de la Comisión dictaminadora para dar facilidades a la revisión de la Constitución."

Para ello los metropolitanos habían influido a parlamentarios de confianza que pudieran actuar cerca del gobierno, incluso del propio presidente, habiendo visitado también a ALCALA ZAMORA -cuya elección para la más alta dignidad de la Republica, decia VIDAL "está asegurada"-, ya que este era firme partidario de la inclusión de dichos artículos, que tendrían por objeto no sólo posibilitar la citada revisión constitucional sino también "alargar los efectos del Presupuesto eclesiástico para los actuales partícipes del mismo, y atenuar en alguna manera lo referente a las Congregaciones religiosas". El cardenal no dejaba de ser optimista en que se logran estos objetivos.

Otro punto de la carta hacía referencia a la preparación del mensaje colectivo del episcopado a los fieles una vez fuera aprobada la Constitución, momento que juzgaban idóneo por los interesantes motivos que exponía y en los que no dejaba de haber un crítico recuerdo de la actuación de SEGURA:

"a) Se debe evitar el espectáculo de la primera Pastoral colectiva dentro del actual régimen, en la cual todas las referencias iban a un texto constitucional muy cambiado cuando aquella

apareció; b) no se habían de estorbar las posibilidades, antes expuestas, de atenuaciones, a las cuales en este momento el mismo Gobierno no parece contrario; c) conviene dar valor definitivo a la actitud del Episcopado, orientando a los fieles para un porvenir bien definido por la Constitución aprobada en firme; d) finalmente, no era prudente exponerse a que se desvirtuara la actitud de la Jerarquía con interpretaciones fáciles de concomitancia con el movimiento de diversos partidos políticos y aun de la misma campaña revisionista, cuya eficacia depende de su espontaneidad y fuerza propia, y a la cual el documento colectivo no hubiera ahora dado mayor intensidad, pudiendo, en cambio atraer dificultades a la próxima organización de la Acción Católica, que ha de tener inconfundible carácter religioso y sobrenatural."

Otro de los párrafos relevantes de esta carta es el relativo a la apreciación del cardenal sobre la marcha de la campaña revisionista, punto en el que insistía a continuación indicando que "generalmente se ha desarrollado con acierto, intensidad y notables resultados", habiendo sido impulsado por los prelados de acuerdo con sus medios propios y, así, cuando había sido prohibida por el gobierno habían aconsejado "que se organizaran actos de afirmación católica y pro libertad de enseñanza y que se fuera aumentando la actuación en defensa de las ordenes religiosas".

No quería, sin embargo, dejar de advertir al arzobispo sobre los peligros que entrañaba el que al movimiento revisionista se unieran "lo que se ha llamado *extremismo integrista*"²⁵⁵, cuya pujanza pasaba a describir para conocimiento de la Santa Sede. No deja de observarse en esta descripción de VIDAL su positivo parecer sobre lo que debía ser, en puridad, todo movimiento católico de siglos:

(255) En bastardilla en el original.

"Actualmente notanse, en diversos puntos, recrudescencias de tal tendencia, buscando la energia catolica mas en actitudes negativas, que en la accion afirmativa de ilustrar conciencias y dirigir voluntades hacia ideales y actuaciones de eficacia; prefiriendo la destemplanza en el lenguaje a la persuasion noble y educadora de la verdad, y a la fuerza de la caridad unitiva; propendiendo a un radicalismo derrotista antes que a la mejora directa e inmediata del estado presente y a la preparacion solida y constante del movimiento renovador con que todas las fuerzas unidas y por todos los medios justos y legitimos se han de alcanzar reformas y tiempos mejores; repartiendo, como en otros tiempos, patentes de liberalismo y de catolicismo, y denostando personas meritisimas y desvirtuando actitudes ejemplares, sin exceptuar de ello a la misma Jerarquia, en lugar de una cooperacion decidida en sostener y ayudar los prestigios de quienes, con toda abnegacion, trabajan por la causa de la Iglesia."

Este "dañino espiritu" empezaba a infiltrarse en diversos lugares "aun entre sacerdotes y religiosos", hasta el punto de haberse sostenido que no convenia la campaña revisionista "porque su triunfo podia servir para consolidar la Republica". Objeto de tales acometidas eran "el gran adalid de la causa catolica, Sr. GIL ROBLES" y aun el mismo nuncio. Ante esta situacion los metropolitanos habian acordado estar muy vigilantes sobre los comentarios de la prensa catolica a fin de prevenir "lamentables divisiones" que podian frustrar el objeto de la restauracion cristiana de la sociedad espanola".

Concluia VIDAL su escrito haciendo al Secretario de Estado vaticano una sintesis de la situacion politica: la seguridad del nombramiento de ALCALA ZAMORA como presidente de la Republica y la probable continuidad del gobierno, lo que hacia conjeturar "que el movimiento de afirmacion catolica y aun la campaña revisionista tendra mas libertad que ahora".

Las mayores complicaciones, no obstante, vendrian de la situacion social "que en alguna provincia alcanza gravedad suma, puesto que el comunismo en diversas partes va invadiendo al socialismo". En el conjunto de la situacion religioso-social el cardinal se remitia a los informes presentados por CARRERAS y VILAPLANA.

Anunciaba por ultimo VIDAL que acababa de recibir en ese momento el texto aprobado del ultimo articulo de la Constitucion -el cual incluia como uno de los documentos del anexo a su carta- y sobre el que indicaba que lo consideraba "notablemente mejor en el sentido de facilitar su revision."⁽²⁵⁶⁾

12. El documento enviado a Pío XI por los metropolitanos.

Como indican BAILLORI y ARBELLOA la concisa remision al informe presentado por los Dres. CARRERAS y VILAPLANA al Vaticano que, al tratar de la cuestion social, hacia VIDAL I BARRAQUER en su carta a PACELLI, seria muy ampliada en el escrito enviado por los metropolitanos el 7 de diciembre al mismo pontifice.⁽²⁵⁷⁾

(256) *Església i Estat durant la segona...* II, pags. 170-178.

Con independencia del texto del articulo citado y de la documentacion del ministerio de Justicia y de AZARA relativa al presupuesto del culto y clero, tambien incluiria el cardinal en sus anexos una nota de GIL ROBLES relativa a los frutos que se iban obteniendo con la campana revisionista. Op. cit. pags. 185-186.

(257) Op. cit. pag. 47.

Es este uno de los documentos mas relevantes de la Iglesia española del periodo -aunque muy escasamente tenido en cuenta por los diversos autores consultados- ya que en el se revela, a nivel de sus mas altos dignatarios y con caracter exclusivo para la propia jerarquia, su pensamiento real sobre la situacion socio-politica del momento. La importancia que damos a este texto y su escasa difusion nos impulsan, aunque no se trate de palabras de los obispos a los fieles motivadas por la legislacion secularizadora, a reproducirlo integro en el apendice, no sin hacer aqui una breve descripcion, basandonos en las palabras de BATLLORI y ARBELOA, sobre las causas que motivaron este mensaje.

Los citados autores indican que en la conferencia de metropolitanos de noviembre de 1931 habian sido tenidos en cuenta tres documentos recibidos de la Santa Sede: las normas sobre la Accion Católica, un breve documento sobre la prensa integrista, en relacion con la unidad de accion del episcopado y los fieles, que habia sido enviado a traves del nuncio por el cardenal PACELLI⁽²⁵⁸⁾ y que iba muy en linea con el pensamiento de VIDAL y un escrito directamente redactado por Pío XI, "reflejo de su actitud personal frente a la situacion religiosa creada por la Republica y ante la actuacion del episcopado."⁽²⁵⁹⁾

(258) "Los Revemos, Metropolitanos pueden tratar en su Conferencia los temas de la prensa y del Siglo Futuro), pero en linea general, esto es, tratando los derechos exclusivos de la jerarquia y el deber que incumbe a todos los fieles de seguirla y no de precederla, de obedecerla y no de pretender criticarla o remolcarla. 5 de noviembre de 1931, Cardenal Pacelli". Los recopiladores del *Archiv* destacan la relevancia de este texto, ya que "parece reflejar el criterio personal del jefe de la Secretaria de Estado, cardenal Pacelli, ante toda la problemática religioso-política de España en aquellos momentos" (Op. cit., págs. 36 y 109-110, nota 1).

(259) Op. cit., pág. 36. La traduccion del texto latin que incluyen en su obra BATLLORI y ARBELOA de este documento del papa ("Gravis theologi sententia de interpretatione danda verbis S[ummi] P[ontificis] ad catholicos Hispanos, merced al concurso de todas las buenas energias y por las vias justas y

Aunque este escrito no había llegado a los metropolitanos por el conducto oficial de la nunciatura ni fue citado en el acta final de la conferencia de metropolitanos, siguen indicándonos los citados autores, sería tenido en cuenta en ella, siendo lo más relevante de su contenido que "permite detectar cierta diferencia de actitud entre Pío XI y sus más inmediatos colaboradores en Roma y Madrid ante la situación española", mucho más intransigente la del pontífice, frente a la moderación propugnada por PACELLI, por el nuncio o por el mismo VIDAL, razón por la que los obispos españoles acordaron contestar a las palabras del papa con un documento que venía a ser una defensa de las veladas críticas que el pontífice hacía de la

legítimas "es la siguiente:

"1. Que los obispos no estén más tiempo callados, antes de todo claro, según lo que han prometido en su respuesta al telegrama del papa, enseñen y amonesten a los fieles, a fin de que conozcan con precisión los males que amenazan a la Iglesia, o que ya la oprimen, y procuren impedirlos cuanto sea posible, pasiva y activamente, por todos los medios lícitos. - 2. Y ya que ahora comienza la campaña revisionista, por la que todos aquellos males pueden ser corregidos o atenuados, la favorezcan abiertamente, y exhorten a todos los católicos a colaborar en ella, a fin de que, por este camino, unidas todas las fuerzas, procuren el bien de la Iglesia, que es al mismo tiempo y también el bien material (la paz, el orden, etc.). - 3. No se contenten con haber adoctrinado a los fieles una sola vez por carta, antes repetidamente, cada vez que se intente hacer algo contra la Iglesia, escriban, hablen y exhorten a los párrocos a ilustrar a los fieles sobre ello. - 4. Promuevan actos externos, ya sea en los templos y en los lugares sagrados de mayor veneración, ya también, si fuera posible, fuera de los templos, como con peregrinaciones, actos de reparación, rogativas. 5. Condenen explícitamente las revistas y los diarios impíos; ayuden a los buenos, y procuren promoverlos. - 6. Si por estas cosas algún obispo fuere castigado por el gobierno, los demás acudan en su favor, solidarizándose con él. Si de manera semejante, algún sacerdote o seglar fuere condenado injustamente por el gobierno, que los obispos lo defiendan. - 7. De manera especial se recomienda ir contra las escuelas laicas con todo empeño, igual que se hizo por los obispos en Bélgica en el año 1879." (Op. cit. págs. 36-37 y 213-214. El punto último que hemos recogido en bastardilla no figura traducido por los recopiladores.)

actitud mantenida por el episcopado y en el que, aparte de explicar con innegable realismo la situación social, política y religiosa del país, daban cuenta de las decisiones que habían tenido que ir adoptando en virtud de la misma.***

(260) Op. cit., págs. 205-213. Ver el apéndice núm. 17.

13. El documento colectivo de 20 de diciembre de 1931.

Tras recibir la oportuna comunicacion del cardenal VIDAL respecto a los resultados de la conferencia de metropolitanos y, entre ellos, el acuerdo adoptado de suscribir un documento colectivo, el nuncio FEDESCHINI le urgiria en carta de tres de diciembre, por expreso encargo del papa, que, sabido ya que la Constitucion iba a ser promulgada el dia nueve siguiente, enviara tal documento en cuanto hubiera sido redactado, pues era deseo del pontifice hacer algo semejante y queria armonizar ambos escritos.¹²⁶¹

A pesar de tales invitaciones no iba el cardenal VIDAL a caer en el mismo estilo que SEGURA, amparado por la urgencia de las circunstancias, y, prefiriendo la actuacion colectiva, como siempre habia propugnado, indico al nuncio, el cinco de diciembre que le enviaria el borrador del documento al tiempo que lo hacia a todos los metropolitanos, con el objeto de que ellos, a su vez, lo trasladaran a sus sufraganeos y, entre todos, se realizaran las observaciones, sugerencias y correcciones que se estimaran oportunas, puntualizando expresamente al nuncio

(261) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, pág. 203.

Pio XI, empero, no publicó ningún nuevo documento sobre la Constitución española y sobre el tratamiento que en ella se dio a la cuestión religiosa, limitándose a hablar de ello, como hemos visto, en la contestation de la felicitacion del colegio cardenalicio de 24 de diciembre.

"por razones que no precisa detallar y V.E. comprendera fácilmente" tales extremos. VIDAL anunciaría el envío de este borrador a los miembros de la jerarquía el trece de diciembre y lo trasladaría también al cardenal PACELLI el día quince. ***

El borrador redactado por el equipo del cardenal VIDAL mereció los plácemes de casi todo el episcopado, cuyos miembros, en ocasiones, tan solo hicieron alguna corrección de estilo, decimos, no obstante, "casi" porque, aunque en el archivo del cardenal no conste, parece que algunos prelados manifestaron al nuncio su disconformidad en algún extremo, tal como este comunicaría al arzobispo de Tarragona ante la sorpresa de este. Que nosotros sepamos, y tal como se desprende del archivo del cardenal, las únicas observaciones que no hacían referencia a cuestiones de estilo serían las de carácter doctrinal formuladas por el cardenal ILUNDAÍN y las realizadas por el obispo de Ávila respecto al tratamiento que se daba en la cuestión del laicismo en la enseñanza, según en el capítulo siguiente expondremos. ***

Conocidos los pareceres de todos los prelados urgía a VIDAL saber la contestación del Vaticano a efectos de no retrasar la publicación del documento, tal como manifestaría a TEDESCHINI por carta de 19 de diciembre y telegrama enviado por el a la misma Secretaría de Estado vaticana. La respuesta no se haría esperar a través de un detallado telegrama tramitado a través de la nunciatura, teniendo como consecuencia la supresión de un párrafo del borrador que se

(262) Op. cit., págs. 247, 260 y 262.

(263) Op. cit., págs. 283-287; 288-289; 292; 293-294 y 298-299.

refería al concordato, otras sugerencias del Vaticano relativas al tratamiento del matrimonio o de la prensa solo fueron atendidas en parte, ya que no habían sido impuestas.'***'

El 29 de diciembre enviaría VIDAL las últimas pruebas a todos los arzobispos, a quienes antes había remitido ya las galeradas, así como a REDESCHINI y a PACELLI. Igualmente las enviaría a ALCALA ZAMORA y a AZARA, a fin de que ambos lo conocieran antes de que fuera difundido por la prensa.'***'

El documento colectivo, fechado el 20 de diciembre de 1931, vería finalmente la luz el 1 de enero de 1932.'***' En el los obispos no solo tratarían de todas las cuestiones derivadas de la legislación secularizadora dictada a lo largo de 1931 y confirmadas por la nueva Constitución sino de la actuación a seguir por los católicos, tanto fuera como, especialmente, en el seno de la Acción Católica, dirigiéndose también singularmente a aquellos vinculados con la prensa.

Comenzaban los obispos el preámbulo del documento justificando ante los mas premiosos la razón del silencio mantenido por muchos de ellos hasta esas fechas: "Quienes conozcan la santa dignidad de la Iglesia Católica, no habrán extrañado la actitud contenida y paciente con que han obrado la Sede apostólica y el Episcopado durante la primera etapa constituyente de la República". Los obispos, no obstante, y

(264) Op. cit. págs. 51-52; 295-297 y 308-309.

(265) Op. cit. págs. 307 y 311-312.

(266) En su detallada "Introducción" al volumen II de *Iglesia y Estado durante la segunda...* BATLLORI y ARBELLOA dan noticia de las distintas publicaciones de prensa y los comentarios efectuados por esta sobre el documento colectivo.

aun habiendo prestado leal acatamiento al gobierno constituido, no habían dejado de protestar, "en la forma más conducente al mantenimiento de las buenas relaciones", "ante multiplicadas disposiciones ministeriales que inmutaban unilateralmente el *statu quo* legal de la Iglesia", e incluso diversas provincias eclesíasticas no habían dudado en enviar a las Cortes las oportunas directrices eclesíasticas durante el proceso de debate constitucional. La Iglesia no había dejado en todo momento de dar pruebas "evidentes y abnegadas de moderación, de paciencia y de generosidad..."

que, salvo el lógico caso de la de izquierdas, fué en general bien acogido. Ver págs. 53-54. Queremos destacar nosotros aquí comentarios de los distintos autores sobre el mismo que, dada su dispar procedencia, no pueden ser más antagónicos: para MUNTANYOLA el documento "por su serenidad, su contenido doctrinal y su aliento apostólico vino a ser la carta magna del episcopado español durante la segunda República", afirmando que "el estilo y aplomo evangélicos de la carta impresionaron al gobierno de la República, y, si por un lado se levantaron críticas y protestas de los extremistas de los dos bandos, por otro creció la admiración y el respeto hacia la figura del cardenal de Tarragona y, en general, por todo el episcopado" y añadiendo que, por ello no es de extrañar que el cardenal VIDAL se negara a firmar la carta colectiva de 1937, "tan distinta de la de 1931, tan contraria a veces" (MUNTANYOLA, Ramón, *Vidal i Barraquer, El cardenal de la paz*, Barcelona, 1971, págs. 229 y 235). También COMAS califica a este documento de "lo más importante... de cuanto ocurrió en la Iglesia española durante el primer quinquenio republicano", destacando el poco conocimiento que existe de él, (COMAS, Ramón, *Isidoro Gómara-Francesc Vidal i Barraquer, Dos visiones antagónicas de la Iglesia española de 1929*, Salamanca, 1977, págs. 96-97. No cabe, sin embargo, juicio más dispar a estos que el exagerado comentario de RAMOS-OLIVEIRA, que indica que el documento colectivo "incitaba a los católicos a la desobediencia civil", por lo que "escaso valor había de concederseles a las subsiguientes protestas de fidelidad al poder constituido," y, ya menos descaminado, que "la Iglesia tenía ahora sus esperanzas a la contrarrevolución, que no tenía por que adoptar la forma insurreccional; el sistema parlamentario garantizaba, a la corte o a la larga, el triunfo de los intereses contrariados por la República" (RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, *Historia de España*, III, México, 1952, pág. 140). Una interpretación más acorde con la realidad que las hasta aquí vistas y opuesta a la de RAMOS-OLIVEIRA es la mantenida por CUENCA TORIBIO, para el que la carta colectiva de 1931 "no sobrepasó los límites de la prudencia" destacando como en esta ocasión la Iglesia "se inclinó por la moderación y apostó por ella" y añadiendo que "la defensa de unos principios irrenunciables no impedía a la jerarquía rebajar el catastrofismo de amplios sectores católicos, a los que combinada a una estricta actuación legal" (CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia y Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid, 1985, págs. 41-42.)

Promulgada la constitucion se entraba en una nueva etapa de la Republica, siendo, pues, el momento "de que el Episcopado de forma solemne a su actitud ante los hechos y aleccione a los fieles para señalarles su conducta futura".

Entrando en el primer punto del escrito, en el que se hacia una especie de resumen de todos los atentados contra la Iglesia realizados por la Republica a base de ir comparando lo que en la Constitucion se reconocia como derechos de todos los espanoles y, sin embargo, se negaba a la Iglesia, declaraban los obispos sin rodeos que los preceptos constitucionales en cuestion religiosa "no solo no responden al minimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia... sino que, inspirados por un criterio sectario, representan una verdadera oposicion aun a aquellas minimas exigencias", lo que habia tenido como resultado resolver unilateralmente las cuestiones que a ella afectaban y excluirla de la vida social, sin ni siquiera reconocerle, al menos, la debida independencia, al quedar sometida "a medidas de excepcion y a ordenamientos restrictivos", invadiendose materias de exclusiva competencia eclesiastica.

"Derecho y libertad en todo y para todos, tal parece ser la inspiracion formulativa de los preceptos constitucionales, con excepcion de la Iglesia.

«Derecho de profesar y practicar libremente cualquier religion; y el ejercicio de la catolica, unica profesada en la nacion, que le debe sus glorias historicas, su patrimonio de civilizacion y de cultura, y su actual conciencia religiosa, es rodeado de recelos y hostilidades, comprensivos de sus legitimos y libres movimientos.

«Libertad a todas las asociaciones, aun las mas subversivas; y se preceptuan extremas precauciones limitativas para las congregaciones religiosas, que se consagran a la perfeccion austerisima de sus miembros, a la caridad social, a la ensenanza generosa, a los ministerios sacerdotales.

«Libertad de opinión, aun para los sistemas mas absurdos y antisociales; y a la Iglesia, en sus propios establecimientos, se la sujeta a la inspección del Estado para la enseñanza de su doctrina.

«Derecho de reunión pacífica y de manifestación; y las procesiones católicas no podrán salir de los edificios sagrados sin especial autorización del Gobierno, que cualquier arbitrariedad, temor facticio o audacia sectaria pueden ser ocasión de que facilmente se niegue.

«Libertad de elegir profesión; y es mermado este derecho a los religiosos, que quedan sometidos a una ley especial, variamente prohibitiva.

«Libertad de cátedra y de enseñanza para todo ciudadano, y para la defensa y propaganda de cualquier sistema y error; y se impone como obligatorio el laicismo en las escuelas oficiales, y a las ordenes religiosas les es prohibido enseñar.

«El Estado y las corporaciones publicas podrán subvencionar toda asociación, cualesquiera que sean sus objetivos y actuaciones; sólo la Iglesia y sus instituciones, que sirven la mas alta finalidad de la vida humana, no podrán ser auxiliadas ni favorecidas.

«Es permitida cualquier manifestación cultural o social en los establecimientos benéficos y en otros centros analogos dependientes del Estado y de las corporaciones publicas; no obstante, un radical espíritu de secularización rodea en ellos de obstaculos y suspicacias el ejercicio del culto y la asistencia espiritual; aun respecto de los cementerios, extensión sagrada de los mismos templos, y perenne expresión de culto, se le niega a la Iglesia el derecho de adquirir nueva propiedad funeraria y la plena jurisdicción.

«Se reconoce el derecho de propiedad, y se dan garantías para su uso y socialización posible; y los bienes de la Iglesia están sometidos a restricciones abusivas, se tiene a las ordenes religiosas bajo continuas amenazas de incautación, y la propiedad de las ordenes cuya disolución se decreta, es afectada a fines docentes o benéficos, aun sin la garantía de respetar el carácter religioso de su origen y sus fines fundacionales.»

A tenor de todo lo expuesto concluyan los obispos este punto, en ocasiones moderado -como en la alusión a la regulacion de cementerios- y en otras sesgado por el logico punto de vista eclesiastico, resaltando que la igualdad de todos los españoles ante la ley no era aplicada a la Iglesia, a la que, en base a una separacion, que bien podia incluir relaciones amistosas, se le negaba tambien la subvencion del culto y clero, prescindiendose no solo del valor social de la religion sino tambien del "caracter de compensacion desamortizadora". La Constitucion española, en suma, no habia acertado

"...a colocarse ni en el tipo medio del derecho constitucional contemporaneo, y no ha sabido auscultar el respetuoso movimiento de comprension religiosa en que se inspiran los mas nobles pueblos que despues de la guerra han debido dar su ley fundamental a las nuevas democracias."

Iniciaban los obispos el punto segundo del documento colectivo expresando que iban a tratar de los temas concretos de la ensenanza, el matrimonio y las ordenes religiosas, "" para pasar seguidamente a reerirse, tras

(267) Tratando en los capitulos correspondientes de las cuestiones relativas a la ensenanza y al matrimonio recogemos aqui, como anteriormente hemos hecho en el caso del mensaje elevado a las Cortes por la provincia eclesiastica de Tarragona, el parrafo dedicado al tratamiento constitucional de las ordenes religiosas, que, ahora, aceptada ya por las constituyentes la fórmula propuesta por AZARRA, se centraria esencialmente en la queja por el tratamiento dado a la Compañia de Jesus:

"Muy afligido ha de mostrarse nuestro animo, cuando nos vemos obligados a lamentarnos gravemente de los peligros que amenazan a las Congregaciones religiosas, que todo catolico considera como expresion social de su mas elevada idealidad religiosa, que la Iglesia mira como instituciones inseparables de su vida evangelica y de su apostolado, y a las cuales la sociedad civil ha de agradecer ejemplos de virtud incomparable, misericordias de heroica caridad, eficacias de solida ensenanza y de muy alta espiritual educacion, bienes generosimos de que han disfrutado luengas generaciones, y que son el mas rico patrimonio moral de los hijos del pueblo. No creemos, empero, no queremos creer que el Estado español llegue a desconocer tales excelencias de las ordenes religiosas, y las

reiterar lo justificado de su protesta en un punto tercero, a dar en el cuarto concretas directrices a los fieles,

soneta a una ley que pueda ser triste recuerdo de despóticas legislaciones creadoras del llamado delito de Congregación.

(Amargurado y aflitivo sobremedra se nos hace el referirnos a la subsistencia constitucional del precepto, que, según autorizadas declaraciones, se refiere directamente a la Compañía de Jesús. No salimos de nuestro asombro de que haya podido sostenerse tal iniquidad, y de que persista el absurdo moral y jurídico de su motivación, que, si para la Compañía vuese gloriosa, para el Estado es humillante. De ser válido el motivo alegado, implicaría la persecución radical de todo religioso y de todo católico, porque el cuarto voto de los Jesuitas, en lo que tenga de realidad, sólo representa la perfección de aquella obediencia que todos los católicos, y por disciplina más rigurosa los religiosos, deben al papa; y significa, en todo caso, un ultraje al mas alto poder espiritual del mundo, al venerando e inerte Soberano de la institución ecuménica superior, y por consiguiente no ligada por principios nacionales, a la sagrada autoridad del Jernarca supremo de la Iglesia, cuya soberanía en el orden religioso es tan legítima a lo menos como la del Estado en su esfera propia, y que no puede considerarse extraño a un país donde es reverenciado y obedecido por millones de ciudadanos.

(Inverosímil por su motivo absurdo y antijurídico, la disolución de la Compañía de Jesús, como de cualquier otra Congregación, representa además una violación de derecho, una ofensa a la Iglesia, una ingratitud del pueblo español y un daño considerable para la paz civil de la República.

(Con tal medida se atenta a las normas del derecho internacional público, declaradas derecho positivo español: son violadas las garantías individuales y políticas proclamadas en la Constitución, que se derivan de la libertad de asociación y de la igualdad de todos los españoles ante la Ley; y es desconocido el derecho elemental de no ser nadie castigado sin ser oído, ni sentenciado sin previa y probada formación de causa, conforme a los trámites legales.

(La Iglesia aparece atacada y ofendida en una de sus instituciones mas queridas y expresivas de su apostolado intelectual y social, sin atención además al derecho innegable con que puede reclamar de todo Estado que le sea respetada su plena personalidad jurídica y libertad de actuación, por medio de las instituciones inseparables de ella, aucho más, en este caso, porque la sola consideración del motivo alegado arguye inexistencia de razón fundamentada y de justificable inculpación.

(Que la disolución de la Compañía, creación del genio religioso y humano de un Santo español, sea una ingratitud de nuestro pueblo, representado por el Parlamento y el Gobierno, no debe probarse ante su larga, fecunda y comotida actuación en pro de la cultura superior y formación científica, de la enseñanza en general, de los ministerios sacerdotales y de toda suerte de obras e instituciones sociales, sin que pueda omitirse su poderosa influencia en conservar y extender el espíritu y la cultura españolas en todos los países hispanoamericanos.

directrices que, para mayor concreción, se estructuraban en once epígrafes:

Señalaban así los obispos, como portico general a sus orientaciones, que todos los rieleos deberían tener "especial empeño en intensificar su mentalidad y conciencia cristiana, a fin de pensar y sentir acordes con la Iglesia jerárquica, y obrar siempre sus mandatos y orientaciones". Mandatos y orientaciones que tenían especial culminación en las directrices pontificias, "singularmente las que versan sobre la educación cristiana de la juventud, el matrimonio cristiano y la restauración del orden social, donde se contienen las direcciones precisas y prácticas que mejor convienen al renacimiento católico de España."

Siguiendo las directrices pontificias pasarán los obispos a estimular la acción directa de los creyentes, añadiendo así a continuación que cuanto más difícil apareciera "la situación de la cosa pública" más habrían de redoblar su celo y esmero en defensa de la fe, y, al tiempo, de la patria. "En consecuencia aportarán su leal concurso a la vida civil y pública... y, aunque no puedan aprobar lo que haya actualmente de censurable en las instituciones políticas, no deben dejar de coadyuvar a que estas mismas instituciones, cuanto sea posible, sirvan para el verdadero y legítimo bien público, proponiéndose infundir en todas las venas del Estado... la orientación y la virtud de la religión católica. Un buen católico, en

si nadie, finalmente, ha de ocultarse el daño que va a sufrir la República, si, con la disolución de la Compañía, quedan desatendidas las obras e instituciones que ella dirige, incumplidos los fines de las donaciones con que tantas familias piadosas han contribuido al establecimiento y vida de aquellas, y ofendidos en su conciencia de creyentes y carácter de ciudadanos los católicos españoles, que sienten como propia la injusticia con ella cometida, y han de sufrir la ingrata correspondencia con que la Constitución misma, estímulo y garantía de convivencia civil, trata a beneméritos y amados compatriotas, dignos al menos de todo respeto por su cooperación a la vida pública del Estado."

razón de la misma religion por el profesada, ha de ser el mejor de los ciudadanos, fiel a su patria, lealmente sumiso, dentro de la esfera de su jurisdicción, a la autoridad civil legitimamente establecida cualquiera que sea la forma de gobierno."

Los creyentes, sin embargo, deberían tener muy clara la distinción entre *poder constituido**** y *legislación**** y entender que la aceptación del primero no implicaba la obediencia a la segunda en aquello que estuviera en oposición con la ley de Dios y de la Iglesia, mas siendo como eran las leyes perfectibles, "todos los católicos considerarán como un deber religioso y civil desplegar perseverante actividad y usar de toda su influencia para contener los abusos progresivos de la legislación, y cambiar en bien las leyes injustas y nocivas hasta el presente", para lo cual deberían comenzar por afianzar su conciencia religiosa mediante actos internos y, tal como el papa había recalcado, externos, mediante la reavivación de las tradiciones religiosas y de un apostolado activo.

"Consecuencia inmediata de esta orientación ha de ser una plena participación en el ejercicio de todos los deberes religiosos privados y sociales, aportando cada uno el máximo concurso a la parroquia, al sostenimiento económico del culto y clero, al fomento de la prensa católica, a las asociaciones piadosas y de apostolado intelectual y social, a la recta organización de los factores de producción y distribución de la riqueza, y armónica y caritativa solución de los problemas entre los mismos existentes, a la defensa de las órdenes y congregaciones Religiosas, en especial las más atacadas y perseguidas; en suma, a todos los fines y actividades de la Acción Católica, que es la participación de los seglares en el mismo apostolado jerárquico de la Iglesia."

Tras dar concretas orientaciones en los temas de la enseñanza y del matrimonio²⁶⁹ seguirían desarrollando los prelados esta idea de la actuación de los católicos en el orden general, con el objeto de que ni se escudaran en la pasividad ni que, movidos por un celo mal entendido, pudieran no solo actuar por su cuenta sino incluso criticar las directrices episcopales. Los creyentes debían actuar, desde luego, y esto era lo que se esperaba de ellos, pero siempre y en todo caso sometidos a las directrices de sus pastores. Así advertirían los obispos de dos peligros que deberían evitar en sus acciones: "la falsa prudencia, y ... la presuntuosa temeridad". Sería aquella temer que "el resistir abiertamente el impetu de los enemigos de la Iglesia" les exasperara o "favorecerles indirectamente, por excesiva indulgencia o pernicioso disimulo".

"Es lo segundo, el falso celo, o peor aun, una simulación, desmentida por la conducta, de muchos que, arrogándose una misión que no les compete, pretenden subordinar la acción de la Iglesia a su juicio y arbitrio, hasta el punto de tomar a mal y aceptar con repugnancia todo lo que de otra manera se hace. Esto no es seguir la autoridad legítima, sino prevenirla, y transferir a personas privadas las funciones de la magistratura espiritual, con gran detrimento del orden perennemente establecido por Dios en su Iglesia, no permitiendo a nadie que impunemente la viole."

La actuación de los católicos, puntualizaban los obispos, debía estar precisamente "en el justo medio" mas con una "docilidad efectiva a la Jerarquía", no debiendo, además, en ningún caso "identificar ni confundir a la Iglesia con ningún partido político" ni utilizar la religión para patrocinar alguno de ellos, si bien los que defendieran cosas buenas y honestas deberían ser apoyados por los católicos que debían recordar que "la abstención y la oposición *a priori*" eran "inconciliables con el amor a la Religión y a la Patria".

(269) Reiteramos sobre estos puntos lo indicado en la nota 267.

Los católicos tenían, no obstante, que actuar unidos, anteponiendo la defensa de la Iglesia a sus convicciones personales en el seno, eso sí, de una democracia que los obispos, en este documento colectivo que aunaba diferencias, no dejaban de defender

"... en los momentos trascendentales para el bien público, y especialmente cuando grandes males afligen a la Iglesia o la amenazan, es un deber ineludible de todos los católicos la unión, o por lo menos la acción práctica común, sea cual fuera el partido a que pertenezcan, sacrificando las opiniones privadas y las divisiones de partido, salva la existencia de los partidos mismos, cuya disolución por nadie se ha de pretender."

Las directrices pontificias y este estilo de la época, según el cual los católicos deberían pensar a través de sus pastores, hacía insistir a estos en la necesidad de "abstenerse, bajo grave responsabilidad de conciencia" de la lectura de "la mala prensa" o favorecerla y, obviamente en la de leer y difundir la que se atemperara a los principios religiosos, especialmente aquella de carácter periódico que defendiera "los intereses de la Iglesia y de la Patria", cuyos redactores deberían estar imbuidos de verdadero espíritu cristiano, siendo fieles a los mandatos de la jerarquía, a quien debían seguir y no preceder, criticar o remolcar.

Tras estimular el celo de sacerdotes y religiosos en esos difíciles momentos y aludir a la inmediata reorganización de la Acción Católica, acabarían los obispos describiendo con crudas palabras la situación de lucha que se vivía, situación que, no obstante, achacaban a consideraciones que parecen, cuando menos, exageradas y no demasiado acordes con el liberalismo laico que había motivado la legislación secularizadora:

"Voces apasionadas claman todavía, por la prosecución de una guerra implacable a la Iglesia, con un afán de exterminio que, cuando menos, es

perturbador e irrealizable. Infundadas acusaciones continúan sosteniendo el gesto receloso e irascible contra la Jerarquía y los católicos, como si fuese cierto el supuesto de que aspiran a la dominación política del Estado, o como si sus actitudes respondiesen de verdad a la vieja inculpación de ser los cristianos ciudadanos facciosos y enemigos de la cosa pública... Ni faltan hombres poco avisados que creen resuelta la crisis religiosa, pensando que con preceptos legales se ha amortizado a Dios y a la Religión en la vida española, y declarando que el Catolicismo les es simplemente indiferente."

Todo ello era vano, después de esta declaración colectiva del episcopado nadie podría negar con fundamento "lo que cabe llamar la perfecta ortodoxia civil de los propósitos y orientaciones de la Iglesia", cuya trascendencia moral no podía ser negada por ninguna potestad

"...y en cuya firmeza doctrinal e independencia afirmativa de actuación en la verdad y en el bien confían innumerables hombres, como en baluarte seguro del espíritu y de la libertad humana frente a la barbarie materialista de las herejías sociales invasoras, y a los excesos de la opresión cesarista del nuevo absolutismo del Estado."

Así criticados tanto el comunismo como el fascismo recordaban los obispos las grandezas pasadas de España debidas a la religión y, por tanto, su interés en mantener esta bienhechora influencia para el bien de la patria, razón por la que no cesarían de sostener las orientaciones dadas

"...y de laborar generosamente a fin de reparar los daños inlingüidos a nuestra sacrosanta Religión, evitar en lo posible los que la amenazan todavía, y preparar días mejores, en que Iglesia y Estado, de mutuo acuerdo -según corresponde a dos sociedades perfectas y soberanas en su propia esfera, coordinadas por la naturaleza que les dio Dios, autor de ambas, y por la necesidad de convivir armónicamente en bien de unos mismos hombres, cuya perfección sobrenatural y temporal les está respectivamente encomendada- renueven y alcancen la anhelada inteligencia, con que se pueda asegurar, en plena paz y estabilidad, la

constitucion cristiana de nuestra patria en el orden legal y social."

Estos deseos de armonia y paz serian constantemente reiterados en la parte final del documento, en el que, si los prelados reconvenian al poder civil recordandole ajenas experiencias, de la que debia de concluir "cuan nocivas y perturbadoras han sido las rupturas entre la Iglesia y el Estado, que despues de violencias apasionadas, daños considerables de todo orden y largos periodos de arduas dificultades, han debido ser reparadas", tambien concluian dirigiendo a los creyentes emocionadas palabras que, exhortandoles a la caridad y comprension, poco tendrian que ver con la mas inmediata historia de España:

"Y cualesquiera que fuesen las arlictivas circunstancias en que veamos sumergida a la Iglesia, no temais, ni pretendais ejercer la vindicta, que solo al Señor corresponde. Recordar que la Iglesia, vence el mal con el bien, que responde a la iniquidad con la justicia, al ultraje con la mansedumbre, a los malos tratos con beneficios, y que en definitiva tambien la ciencia cristiana del suirir es un poder de victoria..."⁽²⁷⁰⁾

Sólo nos queda aludir, para finalizar el tratamiento de la reaccion de la jerarquia ante la Constitucion de 1931 a las "notas" a la Constitucion redactadas por el obispo de Tortosa, Dr. Felix BILBAO y con las que se inicio, precisamente, la publicacion de un "documental" que, a partir de 1932 seria incorporado a diversos boletines eclesiasticos conteniendo las mas importantes normas de la Iglesia y las disposiciones civiles que podian afectarla.

(270) La declaración colectiva del episcopado fue publicada en los distintos boletines eclesiasticos a lo largo del mes de enero de 1932, generalmente inserta en el mismo boletin aunque, en casos, como opusculo impreso (tal se haria por las diócesis de Iarragona y Vich). La diócesis de Santiago lo publicaria en el boletin de 31 de diciembre y la de Oviedo, que la insertaria por partes, comenzaria a publicarla en enero para finalizar en el mes de marzo. El documento integro figura en *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, págs. 672-691 y en IRIBARREN, Jesus, *Documentos colectivos del Episcopado español, 1870-1974*, Madrid, 1974, págs. 160-181.

Estas notas, breves comentarios a los artículos constitucionales, acompañarían al texto de la Constitución debidamente subrayado en aquellos puntos que habían sido aprobados en contra de los principios eclesíasticos. El obispo de Tortosa destacaría así, con independencia del polémico artículo veintiseis, los relativos a la soberanía del Estado, su independencia de la Iglesia y su competencia de legislar sobre las relaciones entre una y otra potestad; la familia, el matrimonio, la riqueza y propiedad, los derechos individuales, la libertad de creencias y opiniones, el tratamiento de las asociaciones, la cultura y la enseñanza y la administración de justicia (artículos 3, 14, 25 a 27, 34, 37, 43 a 45, 48, 49 y 95).⁽²⁷⁾

Siendo el objeto de esta tesis el tratamiento de la reacción de la jerarquía ante la legislación secularizadora del primer bienio de la segunda República, hemos querido ceñirnos en este capítulo esencialmente a tal cuestión, no sin tratar, mas someramente, otros aspectos relevantes como la actuación de los sacerdotes diputados, la reacción de los fieles y los pronunciamientos de prohombres de la época. De la reacción apuntada y con independencia de las protestas específicas del Vaticano, que muchos prelados siguieron, cabe deducir, nuevamente, la disparidad vivida por el episcopado español ante el acontecer democrático y ante una laicización del Estado que iba a plasmarse en la Norma Suprema con singulares atentados a los derechos de la Iglesia.

Tal disparidad, obviamente, iba a darse a otros niveles en el presente caso que la que va hemos visto vivida ante la

(27) Ver el apéndice núm. 18.

naciente Republica. Ante el texto constitucional que se debatía y ante el finalmente aprobado, los prelados sólo podían tener una actitud de rechazo, pero tal rechazo volvería a plasmarse o en frases de gran dureza, como las que hemos visto pronunciadas por los obispos de Mallorca, Iuy, Tarazona, Salamanca, Palencia, Gercna, Huesca o Vich o en juicios que, si duros, no dejaban de invitar a la confianza, como serían los de los Dres. VIDAL, ILUNDAIN, BILBAO UGARRIZA o SENSO LAZARO, junto a un espectro de prelados que se limitarían a glosar las instrucciones vaticanas y a recomendar la religiosidad de los fieles ante los nuevos acontecimientos.

CAPÍTULO III

=====

LA CUESTIÓN DE LA ENSEÑANZA

La necesidad de realizar una profunda reforma del sistema educativo heredado del pasado fue uno de los principales problemas que hubo de asumir la República. Esta necesidad venía impuesta por cuatro hechos esenciales: la existencia de una gran masa de población sin escolarizar;⁽¹⁾ la escasa preparación de quienes impartían la enseñanza;⁽²⁾ el espíritu tradicional y religioso que la presidía, y la agudización de estos dos últimos hechos en aquellos centros escolares, tan numerosos, dependientes de la Iglesia,⁽³⁾ de la que existía la opinión generalizada de que era "un freno para el progreso, algo que se había quedado atrás en la marcha de los tiempos".⁽⁴⁾

La situación descrita era frontalmente contraria al espíritu innovador que debía presidir la enseñanza como uno

-
- (1) "Había en España 500.000 niños sin escuela; 12 millones de españoles, el 50 por ciento de la población, pertenecían a esa extraña especie de seres, extinta en casi todo el mundo occidental, que se conoce por masa analfabeta"... "un incommensurable contingente sin instrucción". RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, *Historia de España*, México, 1952, págs. 143-144.
- (2) "El 57 por ciento de los maestros particulares, seculares y religiosos, carecía de título profesional". Op. cit., pág. 143.
- (3) Las cifras de alumnos que cursaban estudios en instituciones de la Iglesia eran "según datos del gobierno, 128.258 niños y 222.679 niñas, o sea 350.937 escolares, y según la prensa católica... 600.000". Op. cit., págs. 143-144.
- (4) RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión de la segunda República española*, Madrid, 1969, pág. 202. Añade el autor que era "la incultura, la base de la aversión que muchos intelectuales mostraron hacia la Iglesia española". Sobre la falta de cultura generalizada de la Iglesia ver también CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Estudios sobre la Iglesia española del XIX*, Madrid, 1973, págs. 225-238.

de los pilares básicos para la transformación social que el advenimiento de la República debía implicar. De ello eran plenamente conscientes los miembros de sus primeros gobiernos y, así, emprendieron la tarea de la reforma educativa como una de sus actuaciones esenciales y el "más noble" de sus esfuerzos.⁽⁵⁾

1. Las normas del gobierno provisional sobre enseñanza religiosa: supresión de los centros oficiales con carácter optativo en las escuelas primarias: el decreto de 6 de mayo de 1932 y la circular del día 13.- El decreto de 21 de mayo sobre titulación de los maestros y su suspensión.

No cabe duda que entre los cuatro problemas referenciados los más espinosos, tanto por la repercusión social como por el enfrentamiento con la Iglesia que suponían, eran los relativos a la modificación de la concepción religiosa que presidía la enseñanza en las escuelas oficiales -con la consiguiente tendencia a la laicización de las mismas- y la eliminación del poderío de las órdenes y congregaciones religiosas en el ámbito de la educación.

Así y a pesar de las reacciones contrarias que en la opinión católica iba a suscitar, fue en el ámbito de la simbiosis entre enseñanza y religión donde, casi de forma inmediata tras su constitución, comenzó a actuar, con sus omnímodos poderes, el gobierno provisional que, por un escueto decreto fechado el 6 de mayo de 1931, suprimiría la obligatoriedad de la enseñanza del catecismo en los centros

(5) "El esfuerzo más noble de la República se centró, sin duda, en el área pedagógica", RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, Op. cit., pág. 148.

dependientes del ministerio de Instrucción Pública, si bien intentando conjugar la voluntad tanto de padres como de maestros sobre la posible continuidad de tal enseñanza en las escuelas primarias.

"Art. 12. La instrucción religiosa no será obligatoria en las Escuelas primarias, ni en ninguno de los demás Centros dependientes de este Ministerio.

"Art. 22. Los alumnos cuyos padres signifiquen el deseo de que aquéllos la reciban en las Escuelas primarias, la obtendrán en la misma forma que hasta la fecha.

"Art. 32. En los casos en que el Maestro declare su deseo de no dar esta enseñanza, se le confiará a los Sacerdotes que voluntaria y gratuitamente quieran encargarse de ella en horas fijadas, de acuerdo con el Maestro.

"Art. 42. Quedan abolidas todas las disposiciones vigentes que estén en pugna con el espíritu y la letra de este Decreto." (6)

Es obvio que en la decisión del gobierno provisional influyó no sólo el deseo de la reforma educativa sino el compromiso adoptado en el Estatuto Jurídico sobre el respeto de la conciencia individual mediante el reconocimiento de la libertad de creencias y cultos (7) reconocimiento que, por fuerza, debía tener cabida en el ámbito de la enseñanza, punto crucial en el desarrollo individual y en la evolución social.

(6) "Gaceta de Madrid", 9 de mayo de 1931, núm. 129, págs. 619-620.

(7) Ver lo indicado sobre la puesta en práctica del artículo 39 del Estatuto Jurídico y el Concordato de 1851 en el capítulo "La Iglesia ante la República".

La reacción en el campo católico ante la nueva disposición no se hizo esperar; al día siguiente de la publicación del decreto aparecía en "El Debate" un extenso editorial en el que, bajo el título "Un desabogo del sectarismo", se criticaba duramente su contenido. Aludía el periódico a lo "inaplazable" que había sido en el ánimo del gobierno asumir por vía de decreto la modificación del "statu quo" de la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, cuestión que, dada su trascendencia, debía corresponder a las Cortes constituyentes; denunciaba que la norma iba en contra del Concordato firmado con la Santa Sede, cuyo artículo segundo establecía que "la instrucción en las... escuelas públicas y privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma Religión católica"; insistía en el carácter dictatorial de la disposición y recordaba que "existía ya en España una disposición legal, por la cual quedaban exceptuados de asistir a las clases de Religión los niños cuyos padres o tutores así lo desearan", dando a entender que el respeto a la conciencia individual ya estaba plenamente garantizado por la legalidad hasta entonces vigente, frente a ello se introducía la modificación esencial de que "hasta ahora se requería la manifestación expresa de los padres para eximir a los niños de la enseñanza religiosa, y de aquí en adelante... quedaran eximidos los niños cuyos padres no hagan constar su voluntad expresa de que asistan a las clases de Religión", comentario en el que iba implícita la alusión a como antes era tan esencial para el Estado dicha enseñanza que exigía un acto expreso para su exoneración.

(8) Frente a esta concepción es indudable que el gobierno provisional, independientemente de abordar una verdadera laicización de la enseñanza estatal, pretendía garantizar unas prácticas en la demanda de un tipo de educación que, en casos, podían no actuarse por simples mecanismos de presión social, es bien con ello exigía el esfuerzo de la manifestación expresa a quienes, para los católicos, eran la mayoría de la población.

mientras que el nuevo tratamiento que daba el gobierno, al introducir la exigencia de signo opuesto, era a todas luces desconsiderado con el lugar que la enseñanza religiosa debería ocupar en el programa educativo.

Interesante es destacar como, después de aludir a algunas constituciones en que se reconocía como obligatoria la enseñanza de la religión, acababa el editorial haciendo un comentario premonitorio:

"Sólo habra que prevenir una vieja maniobra del sectarismo, ya ensayada, sin éxito, en algunos países, de sacar la clase de Religión fuera del horario escolar, de modo que los alumnos tengan necesidad de acudir a la escuela una hora antes, o de salir una hora después, si quieren aprender dicha asignatura. A este recurso hay que oponerse seriamente para evitar que la enseñanza de la Religión constituya una especie de recargo o castigo, que ahuyente a los alumnos de su estudio".⁽⁹⁾

A la publicación del decreto prohibiendo la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, siguió una extensa circular del Director General de Enseñanza Primaria, Rodolfo LLOPIS, que fechada el día 13 de mayo, fue publicada en la "Gaceta de Madrid" del 22 siguiente.

No entrando en consideraciones sobre si una mera circular era el instrumento jurídico adecuado para desarrollar una norma con rango de decreto que había sido dictada, además, sin la anuencia de unas Cortes aun no formadas, lo

(9) "El Debate", 10 de mayo de 1931. Ver el texto íntegro del editorial en el apéndice núm. 1 de este capítulo.

cierto es que esta y no otro fue el propósito de la nueva disposición, la cual, como tantas veces sucede en los desarrollos normativos, fue mucho más allá de la letra y el espíritu del articulado que desarrollaba.

Venía así la circular a endurecer, transgrediendo los principios del buen hacer normativo, los preceptos del decreto del día seis y lo hacía fundamentalmente en tres cuestiones:

- Exigía que la solicitud de los padres para que a sus hijos se les impartiera la enseñanza religiosa fuera formulada por escrito.
- Determinaba que la enseñanza de la religión, en su caso, se efectuara a primera o a última hora del horario lectivo, quedando exentos de asistir a la escuela en ese tiempo los niños que no fueran a cursarla si no existían otras aulas donde pudieran realizar trabajos prácticos "de interés no fundamental a la cultura primaria."
- Introducía la radical novedad de la alusión a los símbolos religiosos que presidían las escuelas, autorizando su permanencia en aquellos casos en que tanto los maestros como la totalidad de los padres estuvieran de acuerdo en que la religión se continuara impartiendo como hasta entonces; en caso contrario tales símbolos podrían permanecer en las aulas, pero dejando de presidirlas; ahora bien, quedaba proscrita "por antihigiénica e incluso antirreligiosa, la práctica de decorar las paredes de clase con doseles, cromos o imágenes que no sean reproducción estimada de preciosas obras de arte."

Con esta última frase, en forma sibilina y entrando incluso la autoridad civil a considerar lo que podía ser o no ser "antirreligioso", venía a posibilitarse de hecho, y por las condiciones que debían reunir, la supresión del crucifijo u otros emblemas religiosos en aquellas escuelas donde la totalidad de los alumnos, en unión del maestro, no se manifestaran a favor de la continuación de la enseñanza del catecismo.

Dirigiéndose a los inspectores de primera enseñanza indicaba por último la circular -lo que no deja de ser un tanto irónico, dado su contenido- que las normas dictadas fuesen cumplimentadas "en forma que no puedan herir el sentimiento religioso de nadie" y encarecía al mismo tiempo que los maestros fuesen "defendidos en esta manifestación de libertad, tan esencial al patrimonio de la conciencia".⁽¹⁰⁾

Tal como había sucedido con el decreto, la crítica de "El Debate" a la nueva disposición fue inmediata y, así, al día siguiente de su publicación incluía en primera página una columna, titulada "Nuestra protesta", en la que expresaba su más radical disconformidad con lo que interpretaba como supresión del crucifijo en las escuelas, pues con ello se iniciaba en España "una política de laicismo llamada a perturbar hondamente toda la vida nacional". Tras reiterar, como en el editorial anterior, que el dictado de normas sobre la cuestión religiosa era competencia de las Cortes y, desde luego, no de un Director General, hacía uno de los primeros llamamientos a los católicos sobre la posibilidad de actuar en contra de las disposiciones de las autoridades políticas, recordando cómo habían estado dispuestos desde un primer momento a colaborar con el nuevo

(10) Ver el texto íntegro de la circular en el apéndice núm. 2 este capítulo.

regimen, pero que "si el Gobierno, o quienquiera que abuse de su posicion en el Gobierno, empieza por desatar una ofensiva contra los sentimientos de los catolicos, no nos queda mas remedio que llamar a la defensa a cuantos quieran cirnos". Insistiendo en que la escuela era "vital para los catolicos" acababa diciendo que si habia gentes no catolicas necesario era ir a la "reparticion proporcional"; cuestion con la que venia a referirse al tema de la escuela unica.'''

Una ultima disposicion cierra el ciclo de la normativa dictada por el Gobierno provisional en este primer periodo, si bien esta no afectaba mas que indirectamente a la cuestion religiosa en tanto en cuanto, como se ha indicado en la nota 2. mas de la mitad de los maestros, tanto religiosos como seculares, carecian de titulo profesional. Por ello, y al efecto de atajar esta falta de preparacion de quienes impartian la ensenanza, fue dictado el decreto de 21 de mayo por el que se prohibia ejercer la docencia a quien no estuviera en posesion del correspondiente titulo.'''

Refiriendose a este decreto senala escuetamente RAMOS-OLIVEIRA que "las congregaciones religiosas lo desaprobaron y no prospero", añadiendo que ello era "prueba de que no les importaba la aptitud profesional".'''' Estas afirmaciones

(11) "El Debate", 23 de mayo de 1931. Ver el apendice num. 3.

(12) "Articulo 19. Nadie puede ejercer el profesorado en una escuela primaria, sea esta del grado que sea, si no posee el titulo de Maestro. Se exceptuan de este articulo los nucleos de poblacion inferiores a mil habitantes, formen o no Municipio independiente.

"Articulo 20. Nadie puede ejercer el profesorado en Escuelas donde se cursen privadamente la segunda ensenanza o la ensenanza universitaria, si no posee el titulo de licenciado en la materia que ensene.

Articulo 30. Los maestros encargados de ensenanzas especiales (canto, gimnasia, dibujo, trabajo manual) seran dispensados del titulo academico".

(13) Ob. cit., pag. 143.

contrastan con la noticia aparecida en la prensa que, refiriéndose a la orden de las "Hijas de la Caridad", indicaba que habían presentado una instancia solicitando la atenuación de la aplicación del decreto durante ese curso "para dar lugar a que todas las religiosas que están preparándose para terminar sus estudios tengan tiempo de hacerlo y no queden sin enseñanza millares de niños y niñas".⁽¹⁴⁾

Más parece, en efecto, que fue la fuerza de las circunstancias y no la oposición de las órdenes religiosas la que se impuso a los deseos del gobierno provisional que no tuvo más opción, ante la falta de profesores cualificados y pese a los esfuerzos que realizó para solucionar el problema por medio de la formación acelerada de maestros, como más adelante se expondrá, que dictar, antes del inicio del nuevo curso, otro decreto suavizando los términos del anterior y permitiendo, por tanto, impartir la docencia a personas no tituladas.

Esta última medida, aunque coyuntural, no dejaba de ser positiva para la Iglesia y, como tal y para darla a conocer a padres, párrocos y órdenes y congregaciones religiosas, fue reproducida en numerosos boletines eclesiásticos. La nueva norma no respondía ciertamente a un ánimo conciliador del gobierno pues no cabe duda que fueron imperativos ajenos a sus deseos los que le obligaron a adoptarla y, así, con fecha 8 de septiembre, se vio obligado a dictar un decreto autorizando el funcionamiento de escuelas regentadas por personal sin título en aquellas localidades en que las escuelas nacionales no bastaran para atender a la población

(14) "El Sol", 18 de agosto de 1931.

escolar. (15)

La publicación de esta nueva disposición en materia de enseñanza en los distintos boletines eclesiásticos no deja de hacer pensar, pese a lo indicado respecto a la oposición de las órdenes y congregaciones religiosas al decreto de 21 de mayo, en la indudable trascendencia que en el sector católico dedicado a la enseñanza podía revestir la posibilidad de continuar en su ejercicio aún careciendo de la correspondiente titulación. La publicación de la norma se hizo, no obstante, sin comentario alguno y como mera información en las respectivas diócesis.

-
- (15) "El Gobierno de la República, al exigir con su decreto de 21 de mayo la posesión del título correspondiente para poder ejercer el Magisterio privado en cualquiera de sus grados, quiso asegurar para la enseñanza las máximas garantías de la calidad. Y aunque la República, no obstante sus pocos meses de existencia, ha creado ya 7.000 escuelas primarias, es indudable que todavía queda desatendida una gran parte de la población escolar del país, por lo que conviene autorizar el funcionamiento de aquellas escuelas que, aun regentadas por personal sin título, vienen a auxiliar y completar la obra docente del Estado.

(Por ello, el Gobierno de la República decreta:

«Artículo 18. Se exceptuarán de la clausura, al comenzar el curso próximo, aquellas escuelas desempeñadas por personal sin título, siempre que se hallen establecidas en localidades en las que el número de escuelas nacionales no baste para atender a toda la población escolar.

«Artículo 28. Quienes regenten dichas escuelas solicitarán del Consejo provincial de Primera enseñanza, autorización para continuar ejerciendo el Magisterio, autorización que concederá el Consejo provincial de Primera enseñanza, siempre que, a juicio del mismo, los locales donde funcionen las Escuelas reúnan condiciones pedagógicas y las personas que estén al frente de ellas ofrezcan garantías de capacidad.»

("Gaceta de Madrid" de 9 de septiembre de 1931).

2. Los anuncios de escuela "única".

Al tiempo que las disposiciones referidas venían siendo publicadas en la Gaceta de Madrid como forma incipiente de abordar los problemas que acuciaban a la enseñanza y la efectiva separación entre la Iglesia y Estado, en el ministerio de Marcelino DOMÍNGO comenzaban a perfilarse las líneas maestras de lo que debería constituir una enseñanza acorde con los principios del nuevo régimen liberal-parlamentario.

Si "El Debate" del 23 de mayo había pedido ya que se fuera a la "repartición proporcional" era debido a que el día anterior publicaba un editorial con el título usado para encabezar este epígrafe y en el que daba la voz de alerta sobre los nuevos propósitos del gobierno, señalando que desde su llegada al poder venían "sonando repetidas declaraciones de los altos directores del ministerio de Instrucción pública sobre un proyecto de 'Escuela única'". Analizando las consecuencias de su posible implantación enumeraba el editorialista las ventajas que para muchos podía implicar, pero lo hacía para denunciar inmediatamente que este tipo de enseñanza venía a crear "un grave conflicto" en el que peligraba "el sagrado derecho de los padres a la educación de sus hijos": por ello describía la solución dada por la Constitución de Weimar que, aun estableciendo la escuela única, reconocía el derecho de padres y tutores a crear escuelas primarias de acuerdo con sus creencias religiosas. Recordaba también como Pío XI condenaba la escuela única entendida como "la obligatoria para todos", razón por la que era preciso ir a una conciliación de intereses en forma similar a la realizada en Alemania. Afirmaba el editorial que había en favor de la escuela única "un movimiento harto propicio a soliviantar a los católicos", movimiento que tenía sus ejes en los acuerdos de la masonería francesa para defender la escuela

única como "obligatoria para todos los niños, sin distinción de sexos" y en la opinión común de los hombres de izquierda de que "la escuela única implica también la escuela neutra".

Por ello el anunciado proyecto entrañaba para el editorialista "una gran batalla en perspectiva" en la que se iba a jugar "lo más precioso para los padres de familia y lo más vital para los intereses de los católicos", razón por la que acababa señalando -en frase que venía a concitar la opinión de los creyentes contra la posible actuación del gobierno- que "defender la escuela católica tal vez sea una consigna de lucha en días no lejanos".⁽¹⁶⁾

La importancia del tema, de mucha mayor trascendencia para la Iglesia que las disposiciones hasta la fecha dictadas, hizo que el órgano oficial de los líderes católicos insistiera en sus llamadas de alerta y así, a los pocos días, el 29 de mayo, volvía a reiterar su postura en un editorial titulado "La verdadera libertad de conciencia" en el que entrelazaba los temas de la supresión de la enseñanza religiosa y de la escuela única. Comenzaba denunciando que las normas publicadas acusaban "una marcada tendencia al monopolio de la Escuela por parte del Estado" coincidente con otras actuaciones como "el decreto de libertad de cultos", monopolio contrario al derecho de los ciudadanos a la libre elección de escuelas y profesores. Tras señalar que "la escuela pública que hoy hemos empezado a padecer es una escuela recusable para los católicos" según la doctrina proclamada por Pío XI, insistía en la necesidad de implantar "un régimen equitativo de repartición proporcional", dado que "la escuela católica, con maestros católicos, nutrida de arriba abajo de la espiritualidad y de la moral de la Religión, tiene derecho no ya a existir sino a participar de los fondos del Estado en justa proporción al número de alum-

(16) "El Debate", 22 de mayo de 1931. Ver el apéndice núm. 4.

nos que eduque en sus aulas". por su consecución debían trabajar los católicos españoles pues "una escuela laica impuesta obligatoriamente a todos los hijos de padres católicos y pagada con los recursos extraídos a los contribuyentes católicos es una tiranía moral impropia de la época en que vivimos".⁽¹⁷⁾

A este editorial seguiría, por último, el del día 4 de junio en el que, bajo el título "El derecho educativo de los padres", insistía en los temas apuntados defendiendo el derecho sobre la educación de los hijos frente a toda ingerencia estatal.⁽¹⁸⁾

3. Las manifestaciones de la jerarquía ante las nuevas disposiciones y proyectos, mayo-julio de 1931: La circular del obispo de Coria defendiendo la necesidad de la instrucción religiosa y dando normas de actuación a los sacerdotes.- La ausencia generalizada de críticas y las exhortaciones para que los fieles solicitaran la instrucción religiosa. Dos excepciones: la pastoral del obispo de Palencia denunciando la posible implantación de la escuela única y la pastoral del obispo de León.

La reacción de la jerarquía ante las normas secularizadoras de la enseñanza y ante los anuncios de nuevas y más drásticas reformas no se hizo esperar, pero entre todos los miembros del episcopado, es digna de mención la fulminante

(17) "El Debate", 29 de mayo de 1931, ver el apéndice núm. 5.

(18) "El Debate", 4 de junio de 1931.

respuesta del obispo de Coria Dr. Dionisio MORENO BARRIO, que el mismo día siguiente de la publicación del decreto de 6 de mayo tomó la pluma para instruir al clero de su diócesis ante la distinta situación que la entrada en vigor de la norma creaba. De gran trascendencia debía ser el tema para el obispo para dedicarle este escrito el día de la patrona de la ciudad, según consta al pie del mismo, y para hacerlo, además, de una forma tan rápida y solitaria.

Es de destacar, no obstante, que a diferencia de la línea seguida por "El Debate", no contenía la circular del Dr. MORENO ni una sola queja relativa a la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales ni comentario alguno contrario a la actuación del gobierno o relativo a la vulneración del concordato. Se limitaba, con exquisita ponderación respecto al poder civil, quizá por lo reciente de las instrucciones sobre su acatamiento, a estimular el celo y vigilancia de los sacerdotes en orden a la instrucción catequística y a recordar, tanto al clero como a los padres de familia, tutores y maestros, las disposiciones de la Iglesia en materia de educación. Todo ello, bien es cierto, basándose en las apoyaturas ideológicas que tan caras eran a casi todos los miembros del episcopado: los terribles peligros que podían derivarse para el alma del niño y para la convivencia civil en una sociedad sin instrucción religiosa y la indisoluble unidad histórica de religión católica y patria española.

Comenzaba así la circular aludiendo a la "estrechísima cuenta" que habían de dar a Dios por los fieles confiados a su custodia añadiendo que "... ahora, con motivo de las recientes disposiciones sobre la enseñanza del catecismo en las escuelas, se nos presenta un peligro enorme, que debemos prevenir a toda costa."

Este peligro no era otro que el que se cerniría sobre la vida de unos niños que habían carecido de formación religiosa y -más extensamente- el que se cerniría sobre una sociedad sin ella. Con tintes harto sombríos -sin duda para estimular el celo de sus sacerdotes- describía el obispo de Coria tanto la posibilidad de un futuro de la más absoluta ignorancia religiosa (cosa que, evidentemente, las disposiciones del decreto no implicaban) como sus terribles consecuencias:

"¿Y quereis decirnos que será en plazo muy próximo de una sociedad en que la fe y los mandamientos, la oración y los Sacramentos hayan quedado relegados al olvido?. ¿Qué freno podrá contener los deseos pecaminosos, cuyas raíces llevamos todos en nuestra naturaleza depravada? ¿Qué carril enderezará nuestros pasos para que no nos despeñemos en los abismos de la lujuria, de la ambición y del egoísmo? ¿Quién tendrá derecho a sujetar las manos del ladrón, el instinto bestial del sátiro, ni el puñal del asesino?. ¿Acaso el miedo al castigo? ¿Cuántas veces la persuasión de una impunidad fácil y aún segura ofrecerá un estímulo irresistible a las ansias de venganza y de saqueo?"

Solucionar todas estas desviaciones no lo conseguiría la ley civil, pues "¿... que ley puede llegar a sujetar los deseos íntimos del hombre, si de la inteligencia humana se suprime ya desde la infancia a la Ley de Dios?", ni siquiera una correcta educación, pues si aún aquellos que la habían recibido esmeradamente piadosa, como propugnaba, se desviaban muchas veces del camino recto, "¿Que horribles frutos no deberemos temer broten en el campo inculto de un cuerpo con instintos de bestia, fecundado por un alma irreligiosa?"

Terribles eran estas consideraciones del Dr. MORENO que no solo no garantizaban, lógicamente, una vida de fidelidad religiosa a partir de una primera educación cristiana, sino

que bien poco confiaban en la integridad del ser humano a quien auguraban los más terribles resultados de desarrollo cuando aquella no había existido.

La religión, reiteraría el obispo, era el único camino tanto para la paz y dicha terrenas como para la vida eterna y cuantos tuvieran uso de razón estarían obligados a saber las verdades que enseñaba la Iglesia católica para salvarse.

Esta obligación primaria hacía insistir al obispo en la necesidad de instrucción religiosa, de forma que "si los padres o los maestros o los catequistas" no enseñaban aquellas verdades "deber sacratísimo es del sacerdote suplir las ajenas deficiencias y poner manos a la obra sin demora ni descanso" por ser "la ignorancia religiosa del niño, mortífera para su vida espiritual".

"Desde ahora mismo, por consiguiente, hay que redoblar nuestros cuidados catequísticos; todos los Parrocos deben cerciorarse de la actitud en que efectivamente, "" no solo de palabra, se coloquen todos los maestros de su feligresía; y donde quiera que por el examen de los niños se compruebe que se resiente la enseñanza del catecismo, tómenla por su cuenta, valiéndose de cuantos sacerdotes puedan auxiliaries en este capitalísimo ministerio sacerdotal."

Esta actuación sería la que más contribuiría "a formar un pueblo fervorosamente creyente y prácticamente piadoso", dimensiones ambas que parecían ser las más importantes para

(19) En bastardilla en el original.

un católico según el obispo, que añadiría, con una visión de la total dependencia de los reyes respecto a la jerarquía, "a nuestra disposición para toda obra de la gloria de Dios".

Y tras transcribir las normas de Derecho canónico relativas a las obligaciones de padres y maestros en la cuestión de la enseñanza del catecismo (entre ellas el canon 1.374, decisivo en la actitud que debería adoptar la Iglesia española ante la nueva configuración de la escuela: "los niños católicos no asistan a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas, es decir, a las que acudan también anticatólicos"), impondría a los parrocos, entre otras obligaciones, la de darle cuenta de su actuación en las escuelas y de informarle "si hay niños que no reciben instrucción religiosa por voluntad de sus padres; cuantos son esos niños y cuantos los padres de familia", así como la más grave, por la ingerencia eclesiástica que suponía, de que debían ser ellos los que recabarán y transmitirán la petición "por si la negligencia de algunos padres en pedir que a sus hijos se les enseñe la doctrina, o por expresiva [sic] confianza por no creer posible un cambio en la pasada meritisima conducta de los maestros, fuese causa de tal desgracia... recordando a padres y maestros la gravísima obligación consignada en los cánones transcritos."²⁰

(20) 10 de mayo de 1931, "Circular número 32.- A nuestro amadísimo clero". BOE de Coria, año 66, 13 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 145-149. (Dados los argumentos en que se apoya este escrito, su carácter de pionero entre los que sobre el tema de la enseñanza publicó la jerarquía y las normas que contiene, se reproduce íntegro en el apéndice núm. 6).

Con independencia de estas actuaciones de carácter más o menos inmediato, comenzaron los obispos a reaccionar poco a poco, ante la nueva normativa del Estado y, así, fueron reproduciéndose en los distintos boletines eclesiásticos tanto la circular del día 13 como el decreto del día 6 anterior en unión de normas encaminadas esencialmente, siguiendo la pauta marcada por el de Coria, a que no quedara ningún padre católico sin exigir el derecho que le asistía de que sus hijos recibieran la debida instrucción religiosa.

Junto a estas manifestaciones externas del episcopado se produciría igualmente la queja oficiosa como consta, al menos, de la actuación del cardenal VIDAL Y BARRAQUER, quien en 23 de mayo elevó un sentido telegrama a ALCALA ZAMORA en el que, tras reiterarle el "respeto y obediencia debidos (al) regimen constituido", elevaba "enérgica protesta" por el decreto sobre libertad de cultos "y otras disposiciones encaminadas laicización Estado, que hieren profundamente sentimiento católico, constituyen ofensa grave Iglesia por infringir letra y espíritu Concordato vigente, y alteran paz y armonía entre elementos componentes sociedad hondamente religiosa".⁽²¹⁾

Ya hemos indicado que a este telegrama contestaría el presidente minimizando la trascendencia de las mencionadas disposiciones, de ahí que el cardenal en carta de 14 de junio de 1931, le expresara su desacuerdo.⁽²²⁾

(21) *Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 62. Ver el epígrafe 2.4 del capítulo "La Iglesia ante la República."

(22) Op. cit., págs. 65-66 y 70-72. Señalaba el Presidente que la reforma era "modelo de deferencia al sentimiento religioso", añadiendo que "Entre que el Catecismo se enseñe por un Maestro que no sea creyente a niños que tampoco lo sean, o lo expliquen personas ortodoxas o un Sacerdote a los hijos de familias católicas, va indudablemente diferencia de eficacia y respeto para la fe". El cardenal, por su parte, insistía en que mejor hubiera sido imponer la obligación de solicitud "a quienes no deseen tal enseñanza para sus hijos" porque "Sobradamente conoce V.E. la desidia y falta de valor de muchos..."

Al margen de estas intervenciones, y cifrándonos a la actuación externa de la jerarquía, destaca, no obstante, la relativa lentitud de respuesta del episcopado que, salvando el caso del Dr. MORENO BARRIO, no se referiría a la existencia del decreto y circular hasta primeros de junio. Así, el primer boletín eclesiástico, entre los consultados, en que aparecen las debidas instrucciones sobre la actuación a seguir por el clero es el de la archidiócesis de Valencia de 1 de junio. Tales instrucciones se limitaban a recomendar a los párrocos "y a cuantos por su jurisdicción o por su cargo ejercen influencia entre los fieles" que cuidaran que fuera cumplida la disposición sobre "el derecho que se reconoce a los padres, madres y tutores para solicitar que los niños reciban enseñanza religiosa en las escuelas oficiales". A continuación reproducía la parte de la circular del día 13 relativa a la petición de dicha enseñanza y aconsejaba que la misma fuera hecha cuanto antes "pues el no cumplimiento de esta disposición pudiera dar lugar a que se creyera que es indiferente el que se dé o no enseñanza religiosa en las escuelas primarias". Por ello "para facilitar a los padres y tutores el ejercicio del derecho que les asiste, y que al mismo tiempo es un deber esencial, como fieles hijos de la Iglesia Católica, se les ha de advertir de la trascendencia de este trámite y se les ha de instruir para que lo cumplan". Y, a tales efectos, incluía un posible modelo de solicitud.⁽²³⁾

(23) *"El que suscribe (padre, madre o tutor) de (nombre del niño o de la niña) en cumplimiento de las recientes disposiciones,*

«Solicita de U. (nombre del maestro o de la maestra) que este niño reciba en la escuela de su cargo educación religiosa católica.

«(Nombre de la población y fecha).

«(Firma del padre, madre o tutor)

s.f. 'Aviso'. BOE de Valencia, II época, 1 de junio de 1931, núm. 2124, págs. 169-170.

Estas normas fueron reproducidas literalmente, entre los boletines consultados, en los de Pamplona; ⁽²⁴⁾ Vich; ⁽²⁵⁾ Santiago; ⁽²⁶⁾ Zaragoza; ⁽²⁷⁾ Mondoñedo; ⁽²⁸⁾ Granada; ⁽²⁹⁾ Calahorra; ⁽³⁰⁾ Málaga; ⁽³¹⁾ Tarazona y Tudela; ⁽³²⁾ y Gerona; ⁽³³⁾ con fechas que se inician el 1 de junio y concluyen a mediados de septiembre.

Si la terminología utilizada en estas instrucciones llama la atención por aludir simplemente al "derecho que se reconoce a los padres" sin comentario alguno, aun encierra un mayor grado de condescendencia y colaboración la utilizada en el simple "Aviso" publicado en el boletín eclesiástico de la archidiócesis de Tarragona, por cuanto habla de "concesión de derechos e insta a la colaboración entre el clero y los maestros." ⁽³⁴⁾

(24) Id., id. BOE de Pamplona, año 70, 15 de junio de 1931, núm. 1732, págs. 276-277.

(25) Id., id. BOE de Vich, año 77, 15 de junio de 1931, núm. 2975, pag. 328.

(26) Id., id. BOE de Santiago, año 70, 15 de junio de 1931, núm. 2654, pag. 279.

(27) Id., id. BOE de Zaragoza, año 70, 16 de junio de 1931, núm. 12, págs. 232-233.

(28) Id., id. BOE de Mondoñedo, año 74, 6 de julio de 1931, núm. 13, pag. 116.

(29) Id., id. BOE de Granada, año 86, 31 de julio de 1931, núm. 3484, págs. 671-672. (El boletín eclesiástico de Granada lo volvería a publicar a principios de octubre, como recordatorio ante la proximidad del inicio del curso escolar; BOE de Granada, año 86, 1 de octubre de 1931, núm. 3488, págs. 727-728).

(30) Id., id. BOE de Calahorra, año 72, 25 de agosto de 1931, núm. 12, págs. 317-318.

(31) Id., id. BOE de Málaga, 15 de septiembre de 1931, núm. 10, págs. 366-367.

(32) Id., id. BOE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de septiembre de 1931, núm. 671, págs. 692-693.

(33) Id., id. BOE de Gerona, año 75, 26 de septiembre de 1931, núm. 10, págs. 366-367.

(34) "Recientes disposiciones del Ministerio de Instrucción Pública referentes a la enseñanza del Catecismo en las escuelas públicas, conceden a los padres el derecho a solicitar del maestro la educación religiosa para sus hijos.

"Para facilitar el ejercicio de este derecho, conviene que los Rdos. Párrocos y encargados de parroquias se pongan en lo posible de acuerdo con los señores maestros y maestras y al efecto podrían tener a disposición de los padres de familia cuartillas como la siguiente." (sigue el modelo ya transcrito). Id., id. BOE de Tarragona, año 67, 31 de agosto de 1931, núm. 17, pag. 376.

El boletín eclesiástico de la archidiócesis de Sevilla se limitó, por su parte, a publicar el decreto de 6 de mayo y la circular del 13 en dos ocasiones, una en junio, para dar a conocer ambas normas, y otra en septiembre, sin duda como recordatorio ante el próximo curso escolar. Así, el único comentario que aparece del cardenal ILUNDAIN sobre este tema viene contenido en una breve circular de 26 de noviembre sobre preparación de los niños para efectuar la confesión y la comunión, y en la que señalaba al clero parroquial que "si siempre es obligatoria esta catequesis, lo es actualmente mas; pues sabemos los gravísimos danos espirituales de la escuela en que no se enseña la doctrina cristiana", por lo que recomendaba intensificar la catequesis parroquial.⁽³⁵⁾

También el boletín eclesiástico de la diócesis de Oribuela, aun perteneciendo a la provincia eclesiástica de Valencia, se apartaría del modelo de su archidiócesis, seguido por la gran mayoría del episcopado y, así, en 16 de julio publicaría la circular de 13 de mayo incluyendo tras ella una nota en la que simplemente se encarecía a los parrocos "y a cuantos por su jurisdicción o por su cargo ejercen influencia entre los fieles" que cuidaran del cumplimiento de la disposición, "sobre el derecho que se reconoce a los padres, madres y tutores para solicitar que los niños reciban enseñanza religiosa en las escuelas oficiales".⁽³⁶⁾ Esta escueta nota fue ampliada el 1 de agosto con una acción mas emprendedora que la del resto de las diócesis ya que en ella se comunicaba a los parrocos que se habían editado unas "cedulas" que podían adquirir y entregar

(35) BOE de Sevilla, año 74, 25 de junio de 1931, núm. 1183, págs. 217-219; 18 de septiembre de 1931, núm. 1188, págs. 319-320 y 26 de noviembre de 1931, núm. 1193, pág. 398.

(36) s.f. "Aviso sobre la enseñanza religiosa en las escuelas primarias". BOE de Oribuela, año 50, 16 de julio de 1931, núm. 12, págs. 238-239.

a las familias de sus parroquias para que por estas se ejercitara el derecho a solicitar instrucción religiosa para sus hijos.'"" Por ultimo, a mediados de septiembre, y dada la proximidad del curso escolar, volveria a recordar el contenido de la circular de la Dirección General de Enseñanza Primaria y a indicar la existencia de hojas impresas para efectuar la solicitud.'""

Mas al margen de esta generalizada reproduccion, con variantes o no, de las normas dictadas por la archidiócesis de Valencia, destaca en los meses de junio y julio la ausencia de comentarios críticos individuales de la jerarquía sobre las disposiciones tendentes a la laicización de la enseñanza, silencio que sólo se explica por la alusión que a esta cuestión se hizo en el "memorial de agravios" que SEGURA elevara al Presidente del Gobierno provisional, fechado el tres de junio.'""

(37) s.t. "El catecismo en las escuelas", *Ibidem*, 1 de agosto de 1931, núm. 13, págs. 254-255.

(38) "Recordando la Circular sobre la enseñanza religiosa en las escuelas", *Ibidem*, 16 de septiembre de 1931, núm. 16, págs. 299-330.

(39) Aunque ya se ha hablado tanto de la genesis de este documento como del de 9 de mayo, del que traía causa, y recogido integro su contenido así como las distintas fechas de publicación en los boletines eclesíasticos de las diversas diócesis examinadas (ver el capítulo "La Iglesia ante la República"), es procedente reiterar aquí que entre las disposiciones gubernativas causantes de "penosísima impresión" en los metropolitanos, aludía SEGURA a:

"Privación del derecho de la Iglesia a intervenir en el Consejo de Instrucción Pública por medio de uno de sus prelados.

...

"La supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias y en las superiores.

"Prohibición del crucifijo y emblemas religiosos en las escuelas en que haya quienes se nieguen a recibir las enseñanzas de la Iglesia."

Esta línea de silencio seguida por parte de la jerarquía tuvo, sin embargo, sus excepciones, así, el 7 de junio de 1931 escribía el Dr. PARRADO GARCÍA, obispo de Palencia, una extensa pastoral dirigida al clero de su diócesis en la que trataba sin ambages el tema de la escuela única en línea con los editoriales publicados en "El Debate".

Comenzaba así el obispo señalando que las disposiciones dictadas sobre enseñanza religiosa en las escuelas nacionales, en unión de las que se preparaban por el Ministerio de Instrucción Pública para su debate por las Cortes constituyentes eran "los primeros pasos en el camino hacia la escuela única", tal como lo aseguraban "declaraciones orriciosas que la Prensa viene difundiendo por todas partes".

Esta escuela única tenía para el Dr. PARRADO dos caras, ya que:

"¿A quién no seducirá que la instrucción no sea un privilegio de clase? ¿O que los hijos de los pobres, al igual que los de los ricos, encuentren fácil acceso a todos los ramos y grados del saber, según los gustos y aptitudes de cada cual?"

Pero esto, que en sí merecía alabanza, no era para el obispo un nuevo descubrimiento pues había sido la Iglesia, precisamente, la que había fomentado la enseñanza religiosa gratuita, ingresando "los hijos del pueblo", así educados, en la enseñanza secundaria y superior cuando habían tenido aptitudes para ello.

No era esta, pues, la verdadera raíz de la escuela única, ya que si así fuera "no hubiera levantado tanta polvareda donde quiera que se ha querido implantar...", y es que "cuando se plantea el problema de la escuela única, en realidad de lo que se trata es de la educación en aquello

que constituye su fondo y su alma: la vida moral y religiosa".

Para condenar esta nueva escuela que se pretendía implantar, reproduciría el obispo las palabras de Pío XI en su encíclica sobre la educación, que calificaban de "injusto e ilícito" el "monopolio educativo" que forzara a acudir a las escuelas estatales contra la conciencia cristiana o contra las legítimas preferencias; que señalaban como "contraria a los principios fundamentales de la educación la escuela llamada 'neutra' o 'laica', de la que está excluida la religión" y que indicaban que el derecho de los padres a educar a su prole era "anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mismo inviolable por parte de toda potestad terrena".

Apoyándose en estas frases del pontífice denunciaría el obispo que la escuela única era precisamente ese "monopolio educativo", "el cual condena al ostracismo la escuela libre confesional, con la obligación reforzada del laicismo en la enseñanza, oficialmente impuesto a todos los ciudadanos", siendo en el orden jurídico "un atentado contra los padres", "... es la escuela 'sin Dios', que en la realidad práctica se identifica con la escuela 'contra Dios'..." porque en la escuela "la neutralidad es prácticamente imposible".

Por ello, entre las "graves responsabilidades" que iban a pesar sobre los sacerdotes ninguna era tan grave como la de la enseñanza religiosa, y así dirá, copiando casi literalmente al Dr. MORENO BARRIO que:

"Si lo que está obligado a saber y entender el cristiano para salvarse, después que ha llegado al uso de razón, no se lo enseñan los padres y los maestros, deber sacratísimo es del sacerdote suplir las ajenas deficiencias y sin demora ni descanso poner manos a esta obra que no admite dilaciones."

Así, desde ese mismo momento habían de redoblar el celo pastoral en la instrucción religiosa de los fieles, niños y adultos, debiendo los párrocos procurar especialmente que los padres invocaran el derecho que se les "reconocía" a solicitar que sus hijos recibieran enseñanza religiosa en las escuelas nacionales "de maestros católicos", a cuyo efecto incluía la pastoral el modelo al que ya hemos aludido, transcribiendo seguidamente los cánones que se referían a la enseñanza religiosa de los niños e indicando que su cumplimiento necesitaba el común esfuerzo y cooperación de padres, sacerdotes y maestros, por lo que "si alguna de estas fuerzas es nula, han de suplir las otras su acción".

Por ello dictaría una serie de normas para el clero relativas a: cumplimiento estricto de las disposiciones sobre predicación parroquial, catecismo de niños, instrucción doctrinal de adultos y establecimiento de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias, predicación en las misas de los días festivos, organización de la enseñanza religiosa de los niños donde los maestros nacionales se negaran a impartirla previa fijación de la hora de acuerdo con aquellos. Por último imponía a los párrocos la obligación de enviar al obispado en el mes de junio un informe sobre su actuación en las escuelas, señalando el número total de alumnos y si había alguno que no recibiera instrucción religiosa por voluntad de sus padres, debiendo, además averiguar cuanto antes la actitud real de los maestros de su feligresía, añadiendo -en frase también tomada de la circular del de Coria- que "donde quiera que por el examen de los niños comprueben que se resiente la enseñanza religiosa, tomenla por su cuenta valiéndose de cuantos sacerdotes puedan auxiliarles en este

principalísimo ministerio sacerdotal".⁽⁴⁰⁾

También el obispo de León, Dr. José ALVAREZ MIRANDA, fue del parecer de que la situación creada por las nuevas disposiciones del gobierno precisaban una pastoral que diera luz y orientación a sus diocesanos. De esta forma, en 13 de junio de 1931 firmó el documento del episcopado de mayor amplitud en el período, ya que el mismo no iba destinado exclusivamente al clero sino que era un análisis general de la actuación del gobierno dirigida a todos los fieles e incitaba a una toma de actitud concreta frente a la misma. La pastoral se refería tanto a la regulación de la libertad de cultos como a la cuestión de la enseñanza, recordando, sobre ambos extremos, la doctrina de la Iglesia; en ella aludía también, como hemos indicado a los ataques sufridos por las órdenes religiosas con motivo de los incendios de iglesias y conventos de once y doce de mayo.

No obstante la protesta que iba a encerrar y los calificativos que utilizaría para aludir a la supresión de la enseñanza religiosa, comenzaba el documento reiterando el acatamiento debido al régimen constituido "en conformidad con la doctrina de la Iglesia y los deseos de la Santa Sede, para coadyuvar al mantenimiento del orden y el bien de la Patria, obedeciendo a las Autoridades civiles, en todo lo que no sea contrario a la Ley de Dios, y procurando prestar de buen grado nuestra cooperación, a fin de evitar trastornos y perturbaciones y asegurar la paz y la tranquilidad."

Tras ello, con ánimo conciliador, realizaba una comprensiva descripción de la "carga abrumadora" a que debía enfrentarse el gobierno "para la instauración y consolida-

(40) 7 de junio de 1931, "Exhortación pastoral al Clero", BOE de Palencia, año 81, 17 de junio de 1931, núm. 12, págs. 369-380.

ción del nuevo régimen, tarea muy laboriosa y que tanto interesa al bien de la Patria". De ahí que los católicos debían seguir prestándole su leal cooperación, la cual no había de implicar un silencio pasivo, sino que podía asumir también la respetuosa protesta:

"...porque los Gobiernos, sobre todo en los comienzos del régimen, necesitan también que se les propongan orientaciones, que se les infundan alientos, para que no desmayen en sus buenos proyectos de equidad y justicia. Asimismo que se les expongan las necesidades o aspiraciones de los pueblos, pudiendo también hacer reclamaciones o respetuosas protestas por todo lo que redunde en perjuicio de legítimos intereses materiales, o de los que ofenden gravemente los sentimientos religiosos del pueblo católico, tan dignos de todo respeto, conviniendo que lleguen a las altas esferas los tristes ayes de la conciencia lastimada; pero teniendo presente que estas reclamaciones o protestas deben hacerse siempre con el tono respetuoso y la debida consideración a los legítimos superiores."

Por ello, aun no estando en su ánimo "suscitar dificultades o crear obstáculos"

"...siendo un sagrado deber de nuestro cargo velar por la integridad de la santa fe católica y la pureza de la doctrina. Nos vemos en la imperiosa necesidad de consignar nuestra respetuosa pero energética protesta contra lo referente a la enseñanza religiosa en las escuelas; y a la libertad de cultos; porque se ofenden gravemente los sentimientos religiosos de la nación, y particularmente de nuestros amados diocesanos, que no sólo en su inmensa mayoría, sino casi en su totalidad, profesan nuestra santa Religión católica, única verdadera. Y esto es además una manifiesta violación del Concordato, que es un pacto solemne convenido entre la Santa Sede y el Gobierno español, y aparte de otros inconvenientes o peligros, su violación contribuye en gran manera a perturbaciones, discordias y divisiones, cuando con el mayor interés se debe procurar la paz y mayor tranquilidad posible."

Pasaba seguidamente el Dr. ALVAREZ MIRANDA a hacer una sucinta descripción de la necesidad de la religión y la de trabajar por su conservación, por el libre y público ejercicio de la misma, y por el mantenimiento de su influencia en la enseñanza y en todas las instituciones "para que en nuestra Patria todo este informado del espíritu católico", lo que, como era tópico en los documentos de la mayoría de la jerarquía, traería de nuevo la grandeza propia de la historia de España.

Aludía después el obispo a los combates librados contra la Iglesia por los "racionalistas, los librepensadores y protestantes", pero, sobre todo, por sectas como la masonería, sobre la cual, apartándose de la mera consideración del interés en introducir el racionalismo en la enseñanza, haría extensiva su actuación a una lucha total por medio de unos mecanismos cuya descripción, enmarcada en una posible ambición por el poder político por parte de la Iglesia, no hemos encontrado en otros miembros del episcopado:

"Las sectas, en la guerra que hacen a la Iglesia, sobre todo la masonería, disimulan sus perversos fines, aparentando vanos temores de que el Poder eclesiástico invada el terreno político, así procuran engañar al pueblo, dando a entender que el sacerdocio, saliendo de la esfera de su espiritual ministerio, pretende apoderarse de la dirección política de los pueblos y de la nación; cuando las aspiraciones de la Iglesia se encaminaban a influir en el ánimo de los fieles, para que en la sociedad domine la justicia y la caridad; las leyes suavísimas del amor de Dios y del amor de los hombres..."

Centrándose ya en el tema de la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado, consideraría el Dr. ALVAREZ, en actitud distinta a la que hemos visto en la mayoría de la jerarquía y que destaca con gran relevancia, que, al tratar de suprimirla, se actuaba "desconociendo la autoridad de

la Iglesia y despojando⁽¹⁾ a los padres del derecho natural a la instrucción de sus hijos". Por ello, tras diversas consideraciones jurídicas no muy afortunadas -salvo la obvia referencia al concordato- aconsejaba a los padres "que defiendan estos sagrados derechos y no consientan ser despojados de ellos..."

Como vemos, el obispo de León daría un paso más en sus consideraciones sobre la política del gobierno que el resto del episcopado -dejando aparte, claro es, el contenido de la exposición del cardenal SEGURA de tres de junio-, pues aún la pastoral del Dr. PARRADO, como acabamos de analizar, consideraba atentatoria la implantación de la escuela única, pero no llegaba a los calificativos del Dr. ALVAREZ para referirse a la supresión de la enseñanza del catecismo en las oficiales, que definía como verdadera usurpación del Estado.

Seguía su argumentación el obispo advirtiendo contra "la falsedad y graves daños del naturalismo pedagógico" señalando que "es contraria a los principios de la educación la escuela llamada neutra o laica, de la que está excluida la religión, siendo esto motivo bastante, para que no podamos aceptarla".

De ahí que insistiera, pareciendo ignorar los proyectos del gobierno, en la necesidad de trabajar "por la educación e instrucción religiosa de la juventud, principiando por la escuela católica, que es la primera piedra del edificio social". Este trabajo no implicaba ir contra la autoridad constituida ya que:

"Al procurar los padres la escuela católica para sus hijos, cumpliendo un grave deber de conciencia, no pretenden, no hacen obra política de partido; ni tampoco pretenden separar a sus hijos

(1) El subrayado es nuestro.

del cuerpo ni del espíritu nacional, sino antes educarlos en él del modo más perfecto, y más conducente a la prosperidad de la nación; pues el buen católico es por lo mismo el mejor ciudadano, amante de su patria, y lealmente sometido a la Autoridad civil constituida, en cualquier forma legítima de Gobierno."⁽⁴²⁾

En línea con este estímulo en pro de la defensa de la escuela católica daría el obispo de León un paso más al ser el único que iba a recomendar a los maestros "que continúen enseñando la 'Religión en sus escuelas", recordando la deferencia que él mismo mostraba hacia ellos y hacia todo lo concerniente a la educación de los niños en sus visitas pastorales y que la religión era "asignatura de la mayor importancia bajo todos aspectos... que tanto interesa al bien del niño, de la familia y de la Patria". Añadiendo, además, que "así sus escuelas conservarán el carácter envidable y muy honorífico, no sólo de católicas, sino de españolas".

Tras estos argumentos de no demasiada hondura espiritual pero tan acordes con el razonamiento eclesiástico del momento, acabaría el obispo señalando, una vez más, cómo "Es evidente, que el sectarismo pone especial empeño en invadir los dominios de la familia, y en apoderarse de los derechos de los padres en la instrucción y educación de los hijos; y también en excluir de la escuela la intervención de la Iglesia..."⁽⁴³⁾

(42) Aunque el prelado no lo indicaba, estas frases procedían de la encíclica de Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud y servirían de apoyo al discurso de otros prelados figurando casi textualmente en el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931, que tampoco citaba su procedencia.

(43) 13 de junio de 1931, "La enseñanza religiosa y la libertad de cultos", BOE de León, 15 de junio de 1931, núm. 10, págs. 247-269. (Ver el apéndice núm. 7).

La siguiente alusión a la cuestión de la enseñanza religiosa aparecería en el boletín eclesiástico de la diócesis de Segovia,⁽⁴⁴⁾ si bien esta vez en boca de los fieles⁽⁴⁵⁾ ya que dicho boletín publicaría el 30 de junio una "nota diocesana" dando cuenta de la exposición elevada al presidente del gobierno provisional firmada "por más de cinco mil mujeres" de la diócesis y en la que, entre otras cuestiones y siguiendo la línea iniciada por "El Debate", se protestaba "contra los decretos antirreligiosos... como son los de libertad de cultos, de enseñanza laica, supresión del santo crucifijo en las escuelas y demás disposiciones publicadas en materia religiosa." Acababa esta protesta solicitando al gobierno que:

"... se abstenga de legislar en materia religiosa y si algo cree debe hacer, lo lleve a efecto, negociando con la Santa Sede, pues de hacerlo por sí mismo, además de resultar nulo, por tratarse de una esfera, en la que no tiene jurisdicción el Estado, perturbaría las conciencias como sucede con las disposiciones, de las que nos vemos obligados a protestar."

Así como que

"...defienda la Religión católica, que es la de la inmensa mayoría de los españoles, siendo digno de tenerse en cuenta además que nuestra Religión es nuestra historia patria, y a ella debe España todo el peso imponderable de sus glorias y de su civilización."⁽⁴⁶⁾

(44) Es de destacar que en el boletín eclesiástico de la diócesis de Segovia, dejando aparte, claro es, la publicación de los documentos colectivos, no aparece ninguna otra referencia a la cuestión de la enseñanza hasta 1933.

(45) Queremos recordar aquí que la publicación de las manifestaciones de los seglares en los órganos de expresión de la jerarquía implicaba, no obstante, la aquiescencia y aceptación de sus palabras por parte de esta. Ver sobre este extremo la nota núm. 159 del capítulo "La Iglesia ante la República".

(46) 20 de junio de 1931, "Notas diocesanas", BDE de Segovia, año 76, 30 de junio de 1931, núm. 12 pags. 251-252. Ver sobre esta "exposición de protesta" la nota 119 del capítulo antes citado.

Seria a continuacion el boletin eclesiastico de la diocesis de Palencia el que se referiria nuevamente al tema mediante la publicacion de una noticia en la que se afirmaba que la reaccion de los padres espanoles ante las disposiciones del gobierno era la de firmar las correspondientes solicitudes pidiendo la ensenanza del catecismo en las escuelas oficiales y que la diocesis palentina no era "la mas remisa en esta cuestion". Añadia el comentarista que, no obstante esta respuesta, debia desplegarse en todos los pueblos la mayor actividad, ya que el ministerio de Instruccion Publica no prohibia impartir esta ensenanza, sino que la condicionaba a la voluntad de los padres, razon por la que estos -y la recomendacion parece disminuir un tanto la afirmacion contenida en la noticia- debian ser conscientes de que era una cuestion cuya solucion no debia aplazarse.⁴⁷⁾

Tambien con caracter de noticia apareceria quince dias mas tarde en el boletin eclesiastico de la diocesis de Luy el telegrama que la Junta diocesana de la Accion catolica habia dirigido al ministro de Instruccion Publica contra las disposiciones laicas sobre las escuelas publicas y recabando la libertad de ensenanza "como principio basico de los pueblos mas cultos y adelantados". A este telegrama añadia el comentarista del boletin que deseaba que el gobierno enderezase "los pasos torcidos hasta aquí dados" y tuviera para la Iglesia el respeto que para el tenían los ciudadanos catolicos, que eran la mayoria de los espanoles.⁴⁸⁾

47) s.f., "Crónica General.- La ensenanza del Catecismo en las escuelas". BOE de Palencia, año 81, 1 de julio de 1931, núm. 14, págs. 440-441.

48) s.f., "Telegrama de protesta.- La Accion catolica de la diocesis". BOE de Luy, año 82, 15 de julio de 1931, núm. 12, pág. 292.

4. Las ulteriores actuaciones del gobierno provisional y el diseño de escuela única, gratuita y laica.

No era, desde luego, preocupación única del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes diseñar un sistema de educación basado en el respeto a las creencias e ideologías de los ciudadanos; necesario era, fundamentalmente, hacer que la enseñanza llegara a todos, por lo que se presentaba como urgente la ampliación del número de escuelas existentes -máxima con las posibles futuras normas sobre actividades de las órdenes y congregaciones religiosas- y mejorar la calidad de la enseñanza.

En tal sentido daba Marcelino DOMINGO el día 1 de julio la noticia de que el gobierno se proponía crear, en 1931, 7.000 nuevas escuelas, estableciendo con carácter urgente 1.207, de las que 329 serían para niños, otras 329 para niñas y 507 de carácter mixto, más 42 destinadas exclusivamente a parvulos.⁽⁴⁹⁾ y ⁽⁵⁰⁾

(49) "El Sol", 2 de julio de 1931

(50) Sobre la concreción práctica de estos propósitos señala RAMOS-OLIVEIRA lo siguientes:

"...Los resultados de esta política, la más eficaz en el cuadro de los propósitos republicanos, se hicieron sentir pronto. En 1931, el 40 por ciento de los niños en edad escolar asistía a la escuela; en 1932 iba a la escuela el 55 por ciento y de no haberlo impedido la reacción se habría alcanzado el ideal, inserto en el artículo 48 de la Constitución, de imponer la instrucción elemental obligatoria. La República creó 7.000 escuelas en el mismo año de su nacimiento; en 1932, 2.580 y 3.990 en 1933.

«En algunos departamentos del ministerio de Instrucción, la República aumentó el presupuesto en un 800 por ciento y el presupuesto general del ministerio apareció acrecido en más de 100 millones de pesetas. Los sueldos de los maestros, que representaban en el presupuesto, en 1931, 5.890.000 pesetas subían al año si-

Junto a la creación de estos nuevos centros el gobierno se propendía afrontar la solución de otro de los graves problemas a que hemos aludido al principio: el de la debida preparación de los maestros, para lo cual diseñaría unos cursillos intensivos para aquellos que tuvieran que impartir la enseñanza en las nuevas escuelas. El carácter improvisado de la formación que se pretendía sufrió, no obstante, críticas, si bien no por parte del sector católico.⁽⁵¹⁾

guente a 38.263.000 pesetas. En general, las asignaciones del personal docente experimentaron un alza del 50 por ciento.

«En la segunda enseñanza, la República duplicó el número de institutos

«Y en todos los centros docentes, desde la escuela de párvulos a la Universidad... el nuevo régimen introdujo capitales reformas en los métodos de estudio, de acuerdo con las exigencias de la educación de nuestro tiempo.

«En fin, las reformas en la enseñanza de toda clase constituyeron la nota más aguda del régimen en el orden espiritual.»

Antonio RAMOS-OLIVEIRA, op. cit. págs. 149-150.

- (51) «La necesidad de proveer al nombramiento de maestros en número bastante para todas las escuelas de creación inminente, y la repugnancia de los nuevos métodos pedagógicos al sistema habitual de oposiciones, han inducido al Ministerio de Instrucción Pública a habilitar un procedimiento rápido para la selección del profesorado elemental. Consiste este procedimiento en la organización de cursillos con carácter, a la vez formativo y selectivo, cuya responsabilidad e iniciativa se entrega, con liberalismo no exento de vaguedad y laxitud, a los más varios centros culturales, Escuela primaria, Normales, Universidad.
- «En principio no hay nada que objetar al abandono de las oposiciones y la técnica memorística de selección. Mil veces la tritica ha acumulado reproches sobre tal sistema, subrayando lo que tiene la oposición de azarosa y verbalista, gran ruleta de pedagogía en donde siempre logra el pleno la retentiva y muchas veces fallan la preparación y el talento.
- «Pero si el método típico de las oposiciones no nos parece afortunado, tampoco —la verdad sea dicha— estimamos feliz lo instituido en el decreto reciente.
- «Destaquemos sólo un detalle. La primera parte de esos cursos —en diminutivo— de selección comprende "clases de Pedagogía, Letras, Ciencias y Enseñanzas auxiliares", que tendrán lugar en las Escuelas Normales. La última parte, "con lecciones de Orientación cultural y pedagógica", se atribuye a la Universidad. Pues bien, tanto una parte como otra de los cursillos habrán de desenvolverse en un plazo de treinta días cada uno.
- «Se comprende fácilmente que en un mes no es posible aprender ni Pedagogía, ni Letras, ni Ciencias, ni lograr la menor orientación cultural. Es muy otro el tiempo que se requiere para un mínium de preparación científica y para consolidar el criterio didáctico.
- «No han intimado nunca en la Historia la cultura y la prisa. El saber prefiere la lentitud al vertigo, y sólo se alcanza a fuerza de cotidianidad y de fatigas. Ha sido la falta del sentido de lo continuo el mal endémico de la vida española.

Pero si estas actuaciones tendian a mejorar la enseñanza existente sin detrimento del sentimiento religioso, una nueva orientación del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes iba a conmocionar las bases del sistema educativo atacando de frente las prerrogativas de la Iglesia.

encontrado en los tristes años dictatoriales, poseidos por un concepto cinematográfico y apresurado de la vida, Quisieramos que ahora presidiesen signos inversos la labor del Ministerio de Instrucción Pública, que ha de ser, en la nueva España, hogar de disciplina y de santa continuidad."

"Al margen de un Decreto de Instrucción Pública", "El Sol" 9 de agosto de 1931.

Este mismo periódico había incluido el 14 de julio un artículo de C. RIVAS CHERIF en el que, aunque ironizaba sobre la improvisación de nuevos maestros, criticaba al tiempo la actitud de los que hasta ahora habían impartido la enseñanza por su carácter tradicional y conservador, prefiriendo aquellos a estos:

"TEMAS CON VARIACIONES.-VEINTISIETE MIL, UNA,

4Con general aplauso ha recibido la opinión la promesa firme, contrainda por el ministro de Instrucción del Gobierno provisional, de aumentar en veintisiete mil el número de escuelas primarias. No será yo ciertamente de los que protesten contra la improvisación de maestros decretada en consecuencia para subvenir la necesidad de dotar a esas escuelas del personal docente indispensable. Lo que les pueda faltar en tecnicismo a tales profesores improvisados, les bastará de intención. Prefero desde luego esos maestros liberrimos a muchos diplomados en ciencias y artes pedagógicas cuya sabiduría, enderezada a determinadas enseñanzas, fuerzan el natural instinto humano «liberal» de sus discípulos en aras de un concepto histórico conservador, es decir, de reacción tenaz contra todo propósito revolucionario. Mejor, mucho mejor todavía que la improvisación de maestros se hubiera parecido la destitución de algunos, sobre todo si su maestría es superior, es decir, si está vocada a amaestrar maestros, y no se diga si tiene encomendado a su cargo discrecional delicadísimo amaestramiento de maestras. Si tal preeminencia docente lleva consigo cierta facultad de trato internacional, a cuenta del intercambio suscitado con notorio acierto de algunos años a esta parte por la Junta de Ampliación de Estudios, la selección a que aludo es imprescindible. La libertad de toda cátedra supone en primer término la aceptación, por parte del maestro o maestra, de la libertad humana simplemente. Cuando una maestra o un maestro han aceptado, no ya pasiva y resignadamente la esclavitud política de estos años atrás, sino que han contribuido sin excusa a mantenerla con su colaboración académica, y aun ostentando representaciones de sus cargos «técnicos» en una ficción de Parlamento falso, deben ser destituidos, ya que no han tenido la elemental decencia de dimitir. Bienhayan en tanto los maestros nuevos, por muy hechos de pronto que estén, que su improvisación lo será más en cuanto al arte de enseñar (en gran parte nativo, y fácil de aprender el resto) que en cuanto al saber que atesoren, producido, sin duda, en muchos casos de títulos profesionales sin empleo, en Derecho, de Medicina, de Letras, de Ciencias..."

Se encerraba esta orientación en la carta que en el mismo mes de julio escribiría Marcelino DOMÍNGO a Miguel de UNAMUNO en su calidad de presidente del Consejo de Instrucción Pública y en la que le pedía que el proyecto de la nueva ley de Instrucción Pública fuese articulado y finalizado para últimos de septiembre. Dicha ley -señalaba la carta- solo podía tener una finalidad: "instituir la escuela única en España", (irase esta cuyo verdadero alcance no se dilucidaría hasta la aprobación del artículo 48 de la Constitución, como mas adelante veremos: tal escuela, además, debía basarse, entre otros, en los siguientes postulados: "escuela primaria gratuita y laica", "igualdad de clases", "selección de los mejor dotados, sin consideración de fortuna, y en la cultura completa y gratuita de ellos como medio de elevar el país moral, intelectual y económicamente..."(12)

(12) "UNA CARTA DEL MINISTRO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA A DON MIGUEL DE UNAMUNO.

"El ministro de Instrucción pública ha dirigido al Sr. de Unamuno la siguiente carta:

"Es deber, necesidad y compromiso de la República dar una ley de Instrucción pública que responda a las exigencias espirituales de nuestro tiempo y de nuestro pueblo. El edificio escolar del pasado es insuficiente para recoger las ilusiones y resolver los problemas de una democracia moderna. La ley por que postulamos solo puede tener una finalidad: instituir la escuela única en España, para que esta finalidad se cumpla debidamente. Precisa que el proyecto que haya de ser sometido al Parlamento no sea una obra personal ni una obra elaborada en relación, sino que cuente desde el principio con aquella publicidad y colaboración que la dotan de eficacia y autoridad.

"A este objeto, yo me permito rogar al Consejo de Instrucción pública lo siguiente:

"Primero. Convertirse desde este momento en ponente del proyecto y proceder a su articulación.

"Segundo. Basar esta articulación en la instrucción primaria gratuita y laica; en la igualdad de clases; censo en la instrucción y educación; en la selección de los mejor dotados, sin consideración de fortuna, y en la cultura completa y gratuita de ellos como medio de elevar el país moral, intelectual y económicamente; en señalar la misión de la Universidad, y en darle una organización congruente con su misión.

"Tercero. En requerir a cuantos organismos y entidades tengan relación con la enseñanza en cualquiera de sus grados para que antes del 15 de septiembre se hayan reunido y señalado a este ministerio con respecto a la finalidad de la nueva ley la orientación y aspecto que juzquen pertinentes.

"Cuarto. En promover la creación de un centro de investigación.

5. El contenido de los nuevos escritos de la jerarquía, julio-octubre de 1931: La condena de la escuela única y la reacción contra ella (el documento colectivo de 25 de julio; las referencias de los obispos de Palencia y de Vich; el mensaje de la provincia tarraconense a las Cortes Constituyentes). La continuidad en el dictado de directrices ante la opcionalidad de la enseñanza religiosa en la escuela oficial (obispos de León, Mondoñedo, Tuy, Zaragoza y Málaga).— La alusión al tema de la coeducación en el boletín eclesiástico de la diócesis de Palencia.

Con la misma fecha en que la prensa publicaba la carta del ministro iba a suscribirse la pastoral colectiva del mes de julio a cuya génesis y anomalías de divulgación ya se ha aludido.⁵³⁾ En lo referente a la cuestión de la enseñanza la "Carta pastoral del episcopado sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a los católicos" iba a limitarse a recordar las frases del "Syllabus" de Pío IX, condenando, precisamente, tanto la escuela laica como la escuela única o, lo que era lo mismo según el obispo de

"El proyecto de ley habrá de estar articulado y dispuesto para fines de septiente.

"Durante este periodo de elaboración el ministro de Instrucción pública estará en constante comunicación con su Consejo, y cuando reunidos todos los informes se conozca ya el criterio total de los distintos factores y elementos que integran la instrucción pública, el ministro acudirá al Consejo para informar en último término.

"Le saluda con cordial afecto, etc., etc."

Curiosamente "El Sol" tiene una errata en la transcripción del punto segundo de esta carta, que, literalmente, indicaba: "Pasará esta articulación en la instrucción primaria, gratuita y laica, en la igualdad de clases y sexos en la instrucción y educación; en la selección de..." (párrafo citado en *Església i Estat durant la segona...* I, pag. 174, nota 4). Es interesante destacar este extremo ya que con la alusión a la igualdad entre los sexos comenzaba a apropiarse oficialmente el tema de la coeducación, del que más tarde se hablará. "El Sol", 25 de julio de 1931.

53) Ver el capítulo "La Iglesia ante la República".

Falencia habia denunciado, el monopolio estatal de la enseñanza y la exclusión de toda intervencion de la Iglesia en ella.¹²⁴

Pero si, como es obvio, dadas las fechas de redacción, el documento colectivo, por más que saliera al paso de los anuncios de escuela única recordando su condena por la Iglesia, no podía hacer hincapié en los nuevos y ya concretos proyectos del gobierno, no iba a suceder lo mismo con los documentos de los distintos obispos, siendo esta vez también el de Falencia uno de los que volverían a incluir en su boletín eclesiástico un duro comentario sobre el tipo de escuela diseñado por Marcelino DOMÍNGO, comentario que fue

(54) El texto reproducido en el boletín eclesiástico de la archidiócesis de Toledo era el siguiente:

"Respecto de la enseñanza y educación de la juventud el Papa condena la doctrina que afirma que "todo el régimen de las escuelas públicas en donde se forma la juventud de algún Estado cristiano, a excepción, en algunos puntos, de los seminarios episcopales, puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil; de tal manera que a ninguna otra autoridad se reconozca derecho de intervenir en la disciplina de las escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de grados y la elección y aprobación de los maestros.

Asimismo condenó el Romano Pontífice esta proposición: "La mejor constitución de la sociedad civil exige que las escuelas populares, a cualquiera clase que pertenezcan los niños del pueblo que a ellas concurren, y en general los institutos públicos destinados a la enseñanza de las letras y a otros estudios superiores y a la educación de la juventud, estén exentos de toda autoridad, acción moderadora o ingerencia de la Iglesia y que se sometan al pleno albedrío de la autoridad civil, a la voluntad de los gobernantes y según la norma de las opiniones corrientes en el siglo".

(124) "Evangelium", proposiciones 46 y 47. Hace también el caso la Proposición 46 en la que se condena la doctrina que afirma que los católicos pueden aprobar aquella forma de educar a la juventud que está separada, dirigida de la Iglesia y de la potestad de la Iglesia y que se somete a la ciencia de las cosas naturales y de un modo exclusivo a ella la mente humana, los fines de la vida civil y terreno.

BDE de Toledo, año 87, 14 de agosto de 1931, núm. 6, págs. 269-280. El texto del boletín eclesiástico de Tarragona solo difería en que las tres proposiciones de Pio IX están en el propio cuerpo del escrito. (BDE de Tarragona, año 42, 16 de agosto de 1931, núm. 6, págs. 326-344).

publicado, además, tan solo con cinco días de diferencia de la publicación de la carta del ministro por la prensa.

Es difícil dilucidar, no obstante, si era intención del Dr. FARRADO responder con la inclusión de esta nota en estas fechas a la política del ministerio de Instrucción Pública, pues lo cierto es que había sido difundida con anterioridad a la instauración de la República, siendo ya publicada por el boletín eclesiástico de Toledo de 1 de abril de 1931. Boletín que indicaba su procedencia al reseñar que "'La Federación de Amigos de la Enseñanza' ha publicado una hoja acerca de la Escuela Unica que, por juzgarla de interés, insertamos a continuación" (BOE de Toledo, año 87, 1 de abril de 1931, num. 7, págs. 127-128). Se trataba, así, de un texto difundido mucho antes de su inserción en el boletín palentino y del que, por tanto, debían tener previo conocimiento en la diócesis, siendo lo relevante en este caso que se publicara en el precisamente en estas fechas en que, dado el debate a nivel político, se pasaba del terreno de querer anatematizar las hipótesis al de querer alertar contra unas anunciadas previsiones.

El escrito fue incluido en el boletín de Palencia sin referencia alguna a su procedencia; era muy breve pero en extremo contundente y alarmista respecto a las ideologías que podían presidir la nueva escuela y, desde luego, rotundo al señalar que su implantación significaba "el cierre de todas las escuelas católicas". Bajo el expresivo título de "¡Alerta, alerta contra la Escuela única!", este era su texto:

"Padres y madres de familia. Profesores y maestros católicos, ¡alerta! Vuelve el ataque contra las escuelas católicas, contra los maestros católicos oficiales y privados.

«El grito de guerra para imponer la escuela laica es la escuela única. Ya en el Ateneo de Madrid resonó esta voz: Hay que apoderarse del alma del niño, cueste lo que cueste.

«El ataque comienza taimado, como empezó en Francia.

«En Francia ya en 1926 había 13.000 maestros afiliados a la internacional soviética de Moscú, y 80.000 sindicados en la Internacional Socialista de Amsterdam.

«La Escuela única es la escuela comunista. La Escuela única es la escuela impuesta por la Masonería.

«La escuela única es también la escuela laica. Leed esta declaración de la Asamblea del Gran Oriente de Francia:

«La Escuela única, será, naturalmente, nacional, es decir, que no puede existir sin la vigilancia rigurosa del Estado. Su principal carácter será el que sea laica. El laicismo, he ahí la más noble de las ideas republicanas.

«La Escuela única es la fusión completa de la enseñanza oficial y privada, o mejor, la absorción total de la enseñanza privada por la oficial.

«La Escuela única significa, por lo tanto, el cierre de todas las escuelas católicas; es en España la supresión de las Escuelas privadas que educan más de un millón de niños, es la supresión del Catecismo y del Crucifijo en todas las escuelas del Estado.

«La Escuela única es un ataque feroz a la conciencia de los maestros católicos, a quienes, se trata de imponer una pedagogía sin Dios.

«La Escuela única es la dictadura del maestro sin Dios.

«La Escuela única es un atropello brutal del padre de familia, por el Estado, que le arrebató los hijos, los clasifica y les impone violentamente la profesión.

«¡Atención católicos! Ya hay en España inspectores de Primera Enseñanza que visitan centenares de Escuelas, inspectores que llevan en su programa la 'Escuela Única'.

«Fijaos en la Conclusión quinta de la Asamblea de la Confederación Nacional de Maestros.

Todos los niños españoles, sin distinción alguna, se instruirán y educarán en la escuela nacional, que es la única que debe existir.

«La escuela 'única', lo ha dicho nuestro Prelado, es, en el orden jurídico, un atentado contra los padres; en el orden religioso, la escuela "sin Dios". Y suprimida la idea de un Dios

justo, premiador de buenos y castigador de malos, ¿qué hay que eficazmente nos detenga en el cumplimiento del deber? ¿Que fuerzas robustecerán la voluntad de un alma débil y apasionada?."'''

Utilizando una vía más directa y menos alarmista que la del boletín eclesiástico de Palencia, el cardenal VIDAL prefirió dirigirse, el mismo día en que el escrito transcrito fue publicado, -y, por tanto, antes de conocer el contenido de la pastoral colectiva de 25 de julio- a Marcelino DOMINGO en una larga carta en la que, tras referirse a sus anunciados proyectos, trataba con detalle tanto el tema de la escuela única como el de la escuela laica pidiéndole reflexionara sobre sus palabras.''''

A esta carta contestaría el ministro de Instrucción Pública el 14 de agosto en una misiva en la que, si bien muy

(55) s.f., "Alerta, alerta contra la escuela única", BOE de Palencia, año 81, 1 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 492-493.

(56) *Esglesia i Estat durant la segona...*, I, págs. 176-177. De esta carta daría cuenta VIDAL tanto al nuncio IEDESCHINI como al Secretario de Estado Vaticano los días 9 y 12 de agosto respectivamente, también daría cuenta a sus sufragáneos en la conferencia episcopal de la provincia eclesiástica tarraconense celebrada el 7 de agosto (la tercera desde el inicio de la República) y en la que, entre otros extremos, se acordó que "Ante la necesidad de neutralizar las malas doctrinas que recibían los jóvenes en los centros oficiales de enseñanza, precisa fomentar las Academias científico-religiosas, los Internados Universitarios, y otros centros católicos similares. Para entender en este particular se nombrará una Comisión compuesta de religiosos de institutos dedicados a la enseñanza y seglares católicos de reconocida competencia", Comisión que venía a completar las funciones asignadas a la "Comisión de orientación católica" cuya creación se había acordado en la conferencia episcopal tarraconense de 25 de mayo de 1931 y que, aparte de otras cuestiones vinculadas especialmente a la esfera social, tendría como misión la "formación cristiana de niños y jóvenes". En dicha conferencia se dio cuenta también de los trabajos realizados por la Comisión interdiocesana para intensificar la enseñanza del catecismo en sus diferentes grados, se analizó la posibilidad de creación de un instituto católico anexo a la Biblioteca Balbes "a manera de Centro superior de cultura científico-religiosa para seglares" y se establecieron unas normas sobre "uso de las lenguas catalana y castellana en los ministerios eclesiásticos en las diócesis de la provincia eclesiástica tarraconense" de las que destacan por su extensión las relativas a la enseñanza del catecismo. Op. cit., págs. 62-65; 94-95; 194-196; 202-209 y 188-193.

cordialmente, insistía en la defensa y necesidad de una escuela como la que proyectaba instaurar.⁽⁵⁷⁾

Con independencia de estas actuaciones directas seguían los distintos prelados dando instrucciones encaminadas a contrarrestar los efectos de las disposiciones secularizadoras del gobierno, abstracción hecha, en casos, de los nuevos proyectos que se preparaban y del expolio que ello podía significar en las prerrogativas de la Iglesia. Así, por aquellas fechas volvió a tomar la pluma el Dr. ALVAREZ MIRANDA para referirse al tema de la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas, si bien, en este caso, se limitó a redactar una circular dirigida al clero de su diócesis dándole las pertinentes instrucciones sobre la materia, dada la cercanía del inicio del nuevo curso.

De esta forma "para que al terminar las vacaciones y abrir las escuelas, se cumplan las disposiciones vigentes...", se insertaban en el boletín eclesiástico tanto el decreto "por el que desgraciadamente se quitó la obligación de la enseñanza religiosa", como la circular del trece de mayo, encargando a los párrocos la misión de procurar que todos sus feligreses efectuaran la correspondiente petición.

(57) "La Escuela que la República tiene el deber de instaurar en España es una escuela como la que ha hecho de Francia el primer pueblo de Europa. Una escuela que no se apodere del alma del niño, sino que le liberte; que no le someta a dogma alguno, sino que le capacite para aceptar el dogma de su preferencia...". "La Iglesia será respetada, en los fueros que le son propios, por la República. Pero la República está obligada a dar a la escuela sus propios fueros; ...". Opc. cit. pág. 214.

En el comentario a esta carta indica MUNTANYOLA que Marcelino Domingo mantenía su punto de vista "pero reconociendo que ciertas medidas debían ser aplicadas con sentido común"; no parece, sin embargo, que tal reconocimiento se desprenda de esta misiva. Ver MUNTANYOLA, Ramon, *Vidal i Sarraquer, el cardenal de la paz*. Barcelona, 1971 pág. 200.

Es de destacar como el obispo de León aludía a la actuación de los maestros en su diócesis, al decir, en línea con la recomendación que les había hecho en su pastoral de trece de junio acerca de que continuaran con la enseñanza de la religión, que "laudable es el celo con que los Sres. Maestros y Maestras de nuestra Diócesis han cumplido en su totalidad con esta obligación...", esperando, además, que continuasen con tal actitud. Mas, no obstante su rotunda constatación, añadía seguidamente que "si alguno rehusara hacerlo" el sacerdote le supliría "procurando proceder en la mayor unión y armonía" aunque, al margen de tal posibilidad de suplencia -lo cual era tanto invitarles a una actuación cerca de los maestros como ratificar, en efecto, que la actitud de estos no era demasiado contraria de sus deseos-, acababa recomendando a los párrocos que "pongan el mayor interés en que se de a los niños la enseñanza religiosa en la escuela", dando la simple razón para ello de que es "importante y necesario para la buena instrucción y educación".'''

Línea menos optimista y mas similar a la del pionero obispo de Coria sería la seguida por el obispo de Lugo y administrador apostólico de Mondoñedo Dr. Rafael BALANZA NAVARRO que, dando por supuesta la posible negativa de algunos maestros a seguir impartiendo la instrucción religiosa, encargaba "con el mas vivo interés" a los párrocos que asumieran esta tarea. '''

(58) 20 de agosto de 1931, "Circular núm. 289.- Sobre la enseñanza religiosa en la escuela", BDE de León, 25 de agosto de 1931, núm. 15, pág. 413.

(59) 29 de agosto de 1931.- "Circular sobre la enseñanza religiosa en la escuela", BOE de Mondoñedo, año 74, 5 de septiembre de 1931, núm. 17, págs. 141-142.

Más acorde con las argumentaciones de la carta del arzobispo de Iarragona y, por tanto, con la actualidad del momento, sería el contenido de la pastoral escrita por su sufragáneo, Dr. Juan PERELLO y POU, obispo de Vich, que, como ya hemos indicado, el 24 de agosto glosaría para sus fieles el documento colectivo del episcopado de 25 de julio. En el epígrafe dedicado a la enseñanza aludiría, así, a las virtudes de la escuela única y a los peligros de la escuela laica ("lejos de repugnar, halaga sobremano que el Estado de facilidades a los pobres de modo que se coniundan con los ricos en materia de instrucción hasta tal punto que sea la misma escuela para todos.- Pero no se puede aprobar el monopolio de la enseñanza a favor del Estado; y es digna de execración la escuela laica, máxime cuando la enseñanza es obligatoria"). acabando, tras también transcribir proposiciones del "Syllabus", con la condena de las disposiciones y proyectos estatales en cuestión de enseñanza:

"Es por consiguiente un error y una confiscación del niño y expropiación de la familia obligarle a que asista a la escuela única; y es verdadero y horroroso crimen llevarlo necesariamente a una escuela donde están proscritos el catecismo y el crucifijo."...

Uno de los más importantes acuerdos adoptados por el cardenal VIDAL y sus sufraganeos en la conferencia mantenida el siete de agosto, fue, como ha quedado expuesto en el capítulo anterior, el de elevar "un razonado Mensaje Colectivo de los Prelados de esta Provincia Eclesiástica a las Cortes Constituyentes en defensa de los derechos de la Iglesia, e interesar por diferentes medios, públicos y particulares, la acción de los católicos, para proponer y

(60) 24 de agosto de 1931, "Allocución pastoral sobre el anterior documento", BOE de Vich, año 77, 31 de agosto de 1931, núm. 2080, págs. 443-451. (Ver el comentario global de la pastoral en el capítulo "La Constitución de 1931").

defender las oportunas enmiendas al proyecto de Constitución".

En lo que a la cuestión de la enseñanza religiosa se refiere, y tras aludir a las "libertades de perdición" que acompañaban la evolución de algunas sociedades, tales como la "libertad de pensar, de escribir, de enseñar" y la de cultos, señalaba el "mensaje" que ese cúmulo se agravaba "...con la escuela laica y el monopolio escolar en manos del Estado ateo". Defendía -siguiendo una argumentación muy similar a la efectuada por el obispo de Palencia en su pastoral de 7 de junio- la actuación de la Iglesia respecto a la "elevación de las clases populares por la instrucción gratuita" siendo ella la que "con una abnegación y desinterés nunca igualados, ha educado en sus escuelas o por medio de sus corporaciones a los hijos del pueblo".

Desarrolladas estas consideraciones pasaban los obispos a enjuiciar los nuevos proyectos de escuela con frases de gran dureza en las que, aun en contra de la realidad de los hechos y siguiendo el ánimo conciliador que presidía toda la actuación del cardenal desde la instauración del nuevo régimen, intentaban exculpar la acción del propio gobierno y, así, señalaban que "faltarían... a su deber si no reprobasen la obra nefasta que de suyo (aunque sea contra la intención de las autoridades públicas) tiende a convertir la escuela en matadero de almas..." Esta acción política era, sin embargo, plenamente reconocida a continuación al indicar como tampoco podían "...ocultar su zozobra por los males que nos amenazan haciendo universal y obligatoria la escuela laica con el monopolio escolar en manos de un Estado ateo...", monopolio que implicaba una "...conculcación de los derechos de la Iglesia, de la familia y del individuo".

"Conculcaria los derechos de la Iglesia, pues, teniendo ella no sólo el derecho, sino el deber, de encaminar a los fieles hacia el último fin, tiene igualmente el derecho y el deber de usar los medios que, como la enseñanza, conducen a él. Este derecho no es privado, sino público, ya que la Iglesia no es sociedad privada, sino pública, por lo cual injustamente desconoce la autoridad civil en las sociedades católicas la enseñanza dada por ella o por las corporaciones que autoriza, enseñanza que debiera ser reconocida en todos sus efectos. Con razón, por tanto, proscribió el *Syllabus* de Pío IX, en tres de sus proposiciones (47, 47, 48), el monopolio del Estado que excluye a la Iglesia del régimen escolar."

Conculcaria igualmente los de la familia por su derecho natural a educar a la prole, tal como señalara Pío XI en su encíclica sobre la educación cristiana y, finalmente -y aquí querían los obispos defender para la Iglesia un derecho que el régimen republicano debía de reconocer a todos- "...conculcaria los derechos del individuo al ejercicio libre de su actividad y al de asociarse para fines legítimos, cual es el de la enseñanza".

Por todo ello, insistirán los obispos, el monopolio estatal de la enseñanza "...revestiría caracteres de verdadera tiranía de las conciencias con la escuela laica, aberración monstruosa, contraria al concepto mismo de la educación, reprobada por los cánones de la Iglesia, y de funestos resultados para la sociedad".

Para apoyar toda su argumentación transcribirían los obispos las frases de Pío XI en la encíclica citada, que ya hemos visto recogidas en la pastoral del obispo de Palencia y en los editoriales de "El Debate", en los que se enjuiciaban las escuelas neutras, laicas o mixtas y la actitud que los católicos habían de guardar hacia ellas. A estas frases añadirían las que señalaban la necesidad de que

toda la enseñanza y organización de la escuela "... estén imbuidos de espíritu cristiano, bajo la dirección y vigilancia materna de la Iglesia..." y las que, finalmente, proponían, como había recogido el diario de Angel HERRERA, que el Estado defendiera la pluralidad de enseñanzas por medio de "...la justicia distributiva, con el subsidio pecuniario... a cada una de las escuelas escogidas por las familias", si bien los obispos de Iarragona, aplicando esta última idea del papa a la situación española, arguirían que en ella primaba la mayoría católica por lo que dirían "Aquí... la escuela puede y debe ser enteramente católica, desde luego la oficial, y sólo por tolerancia se ha permitido que las haya privadas que no lo son".(*)

Como ya se ha indicado, el día 22 de agosto remitió el arzobispo de Iarragona este documento a Julián BESTEIRO, presidente de las Cortes constituyentes, y a partir del día 29 a las restantes autoridades políticas y eclesiásticas. No se puede deducir de la recopilación de Batllori y Arbeloa del archivo del cardenal en que fecha lo recibiría ALCALÁ ZAMORA, pero es interesante comparar las ideas contenidas en el mensaje con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno provisional en aquellos días ante las Cortes, en las que, al tiempo que defendía la actuación del gabinete en materia de enseñanza, no dejaba de proclamar, armonizándolas con las medidas tomadas hasta el momento, sus creencias religiosas. Comenzó así ALCALÁ ZAMORA describiendo las realizaciones efectuadas:

"...Afirmada plenamente la libertad de conciencia y la libertad de culto... afirmada la libertad de la vida civil frente a la vida... la labor del ministro de Instrucción Pública completo la independencia del criterio civil en torno a la enseñanza, pero... con aquella moderación que al Gobierno imponía su prudencia y que le recordaba su composición... fórmula neutra, respetuosa y ecuanime, absolutamente defendible y absolutamente aceptable por todos, porque si en el orden de la conciencia y del culto era la libertad, en

aquellas medidas que el ministro de Instrucción publica proponía, remate o base, que son las dos cosas, del esfuerzo creador de las 7.000 escuelas que redima del analfabetismo, por encima de todos los enconos, de todos los disfraces que el espíritu sectario pueda señalar, hay un criterio de santa tolerancia y de amplia libertad. De suerte que cuando él proponía las medidas expresión de su pensamiento, libre de huella de todo prejuicio religioso, podíamos aceptarlas hombres que llevamos en el alma grabada, y que no lo ocultamos jamás, aun cuando estemos ante público de distinto predominio, la huella imborrable del libro para mí más grande, más emocionante y más santo de cuantos conoce la Humanidad; porque mi pluma firmaba aquellos decretos sobre la enseñanza de la infancia recordando el texto, que ningún escepticismo dejara de presentarnos como uno de los más grandes de la Humanidad, como ejemplo y autoridad dogmática para mí el primero: "Dejad que los niños se acerquen a mí". Dejar, que es no prohibir, pero no imponer, permitir que el alma infantil se acerque a la enseñanza del Evangelio. Y así pude firmarlos y así los firmé -de ello no me arrepiento-, y, en nombre de distintos criterios, comparto con el ministro de Instrucción publica la responsabilidad de la medida... "(*)"

El talante del catolicismo del presidente no era, sin embargo, compartido por el que defendía "El Debate" que, el once de septiembre criticaría el contenido del artículo 46 del proyecto de Constitución, proyecto con el que estaba implícitamente de acuerdo ALCALÁ ZAMORA al defender toda la actuación seguida por Marcelino DOMINGO, en la que se enmarcaba, aunque a ello no aludiera el presidente en su discurso, su diseño de la la nueva escuela y que encajaba literalmente con el texto del artículo criticado ("La enseñanza primaria se dará en la Escuela única, que será gratuita, obligatoria y laica").

(*) "El Sol", 29 de agosto de 1931.

La postura de "El Debate" no encerraba, no obstante, novedad alguna ya que se limitó a reiterar las argumentaciones ya esbozadas en sus editoriales de 22 y 29 de mayo y 4 de junio, destacando la solución adoptada por otras constituciones, especialmente la alemana, y proclamando la necesidad de ir al "repartimiento proporcional" que describía con estas palabras: "... el Estado reparte su presupuesto de Instrucción entre todos los ciudadanos de edad escolar, y entrega la parte proporcional a cada Escuela, a razón de los alumnos que educa, sin distinción de Escuelas laicas o religiosas. La distinción toca hacerla a los padres, en uso de su perfecto derecho, a educar a sus hijos según su leal saber y entender".⁽⁶²⁾

En una pastoral fechada en doce de septiembre insistiría el Dr. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, obispo de Tuy, en indicar a los fieles la doctrina de la Iglesia respecto a la educación religiosa de sus hijos. Pastoral en la que, sin criticar la laicización decretada por el gobierno, no dejaba de reiterar la obligación de los católicos de procurar que en todos los centros escolares la educación impartida fuera de carácter religioso. Así, tras una introducción de carácter general en la que describía la educación que los fieles debían impartir a su prole en el seno del hogar familiar, indicaba el obispo:

"La recomendación segunda que tenemos que haceros... es acerca de la educación en las escuelas y colegios. En todas las escuelas y colegios la educación debe ser cristiana, católica, y los padres católicos, de verdad cristianos, están obligados, con obligación gravísima a procurar con todo empeño que la educación sea en todas las escuelas y colegios verdadera y profundamente católica."

(62) "El Debate", 11 de septiembre de 1931.

La razón de tal obligación nacía porque, como señalaba el Dr. GARCÍA glosando palabras de Pío XI, la escuela era complemento de la familia y de la Iglesia, instituciones de las que había nacido "mucho antes que por obra del Estado". Por ello, "ante la avalancha que se nos viene encima de escuelas sin educación cristiana", el segundo deber de los padres, si, pese a sus esfuerzos, hubiera escuelas no cristianas, era "apartar a sus hijos de esas escuelas en las que hay peligro de que beban el fatal veneno de la impiedad y de la incredulidad"; tales escuelas eran, según las tantas veces transcritas palabras del pontífice, tanto las laicas como las neutras o mixtas, que no tenían por qué ser establecidas necesariamente para que el Estado cumpliera la laudable obra de abrir las puertas del saber a todos los ciudadanos aptos, posibilitándoles "subir a las categorías más altas de la jerarquía social".

Por todo ello el tercer deber de los padres católicos en ese mes de septiembre era "pedir en debida forma que los maestros enseñen religión católica a sus hijos...", poniendo en juego "todos los recursos legales y amistosos para impedir que el laicismo penetre en la escuela pública española".

Finalizaba la pastoral del obispo de Iruy suplicando a los maestros nacionales de la diócesis "muchos de ellos beneméritos en grado muy alto de la enseñanza religiosa" que continuaran impartiendo tal enseñanza.

A continuación, y como anexo, se insertaba el modelo de solicitud que, a tales efectos, debían presentar los padres de los alumnos.***

(64) 12 de septiembre de 1931.- "Instrucción pastoral acerca de la educación cristiana de la niñez y de la juventud; derechos y deberes de los padres", BOE de Iruy, año 72, 20 de septiembre de 1931, núm. 16, págs. 371-382 (Ver el apéndice núm. 8).

Fue el boletín eclesiástico de la archidiócesis de Zaragoza el que en estas fechas de septiembre más se distinguió por la publicación de escritos tratando el tema de la educación religiosa, si bien ninguno de ellos era producto de la pluma del arzobispo Dr. Rigoberto DOMENECH VALLS. Así, el número del día 16, casi monográfico sobre el tema, incluía dos documentos, uno del obispo de Málaga, Dr. Manuel GONZALEZ GARCIA y otro firmado por Daniel LLORENTE y tomado de la "Revista Catequística", cuya continuación fue publicada en el número siguiente del boletín y que sería también publicado, simultáneamente, por el boletín de Tarazona y Tudela.

Bajo el título "Enseñanzas dolorosas para los padres católicos" el escrito del obispo de Málaga se apartaba del tema de la escuela primaria, crucial en aquellos momentos, para centrar sus críticas en las instituciones de enseñanza superior de carácter laico, describiendo por medio de casos ejemplares, que el redactor del boletín completaba, la forma en que lograban "pervertir" las almas de jóvenes que habían recibido una esmerada educación cristiana en su niñez. Las alusiones del escrito no dejan de hacer pensar que todas sus críticas y comentarios iban dirigidos a la Institución Libre de Enseñanza.⁽⁶⁵⁾

El artículo de LLORENTE se ceñía, por el contrario, a la actualidad, incluyendo las disposiciones del gobierno sobre la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, criticando el proyecto de escuela única y dando orientaciones a los sacerdotes sobre la forma en que, caso de que el

(65) s.r. "Enseñanzas dolorosas para los padres católicos", BOE de Zaragoza, año 70, 16 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 412-415. Este escrito no aparece reproducido, curiosamente, en el BOE de Málaga, ignorando, en consecuencia, de donde lo tomaba el de Zaragoza al no dar indicación alguna al respecto. Ver el apéndice núm. 93.

maestro no impartiera la enseñanza religiosa, debían proceder a asumir esta tarea; aparte de dar consejos precisos para el mejor provecho de sus lecciones, recomendaba el articulista a los parrocos "prudencia y sagacidad" para acordar con los maestros las horas dedicadas al catecismo y se apoyaba en lo que entendía era la legislación vigente para fijar la periodicidad y duración de tal enseñanza. El autor no dejaba de cuestionar, como había hecho el cardenal VIDAL en su carta a ALCALA ZAMORA de 14 de junio, la diligencia de los católicos en responder a las posibilidades dadas por las disposiciones del gobierno:

"Para respetar la libertad de conciencia, en que se basa el decreto, hubiera bastado con dispensar de la enseñanza religiosa a los alumnos cuyos padres lo indicasen; en vez de exigir que hayan de manifestar su deseo los que quieran la reiterada instrucción para sus hijos."

«Bien clara es la gran distancia que hay entre ambas cosas, dada la negligencia de muchos padres. Aparte de que en varias naciones como ocurrió en Italia, antes del fascismo, suele pasarse de ahí a quedar a la Religión fuera del horario escolar.

«Se presenta, pues, al párroco y a los católicos un nuevo campo de acción: convencer a los padres de cuanto les va a ellos mismos en que sus hijos aprendan la Doctrina Cristiana.

...

«Si el maestro declara su deseo de no dar enseñanza religiosa se coniará... al sacerdote.

«Y aquí se nos presentan no leves dificultades. ¿Qué prudencia y sagacidad no ha de ser necesaria para ponerse de acuerdo con el maestro acerca de las horas!.. Desde luego la clase de Religión no ha de caer fuera del horario de la escuela. Pero ¿cuánto tiempo ha de durar? ¿En qué días?... "Habrá lección corta, pero diaria de Doctrina Cristiana..." dice el art. 39 del Reglamento de Escuelas Públicas de Instrucción primaria, del 26 de noviembre de 1835, artículo que expresamente declaró en vigor el Real Decreto de 1913... y que aun lo está, pues no se halla en pugna con el actual decreto.

«Vea pues el sacerdote, consultado el Ordinario, de obtener las mayores ventajas: un tiempo en que los niños no estén fatigados, una distribución que le permita graduar la enseñanza. Todo esto supone que el sacerdote se ha preocupado de estas cuestiones pedagógicas.»⁽⁶⁶⁾

La diócesis de Palencia, una de las más preocupadas por el tema de la enseñanza a juzgar por el contenido de su boletín eclesiástico, publicaría por su parte, a primeros de octubre, un fragmento de una de las pastorales del arzobispo francés Ricard en el que se aludía a las corrientes que intentaban defender la pertenencia de los niños al Estado y el derecho de éste a monopolizar la formación de sus almas por encima de toda tutela familiar. Como introducción al fragmento se refería el redactor del boletín a los defensores de la escuela única como partidarios de una doctrina que propugnaba que las funciones parentales solo se ejercían en el marco de las atribuciones concedidas a los padres por el Estado, del cual eran, como los maestros, simples delegados:

"Porque para los partidarios de la escuela única, no es el maestro un representante, o encargado y auxiliar de los padres de familia; los padres son, como los maestros, delegados del Estado; y uno y otros no tienen más atribuciones que las que el Estado les confiere."⁽⁶⁷⁾

(66) s.f. "Cuestiones de actualidad.- Denis qui zelum habet... exeat (I Mach, 11-27), Ibidem, págs. 415-419 y "Cuestiones de actualidad (continuación).- Siembra por la mañana... y por la tarde..." BUE de Zaragoza, año 70, 1 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 421-425. También publicado íntegro en el BDE de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de septiembre de 1931, núm. 671, págs. 696 a 706. (Ver el texto íntegro en el apéndice núm. 10).

(67) s.f. "De quien son los niños?"- BDE de Palencia, año 81, 1 de octubre de 1931, núm. 21, págs. 640-641. Este escrito también fue reproducido, entre los boletines eclesiásticos consultados, en el de Tarazona y Tudela, año 69, 15 de noviembre de 1931, núm. 696, págs. 850-852 v. bastante más tarde, en el de Coria, año 67, 15 de junio de 1932, núm. 36, págs. 500-501. (Ver el texto íntegro en el apéndice núm. 11).

Fue también la diócesis de Palencia la única entre las consultadas que en 1931 se refirió, si bien en forma muy escueta y tangencial, a un tema que, aunque no tan crucial como los relativos a la ausencia de la religión en el programa oficial de las escuelas primarias o la implantación de la escuela única, suscitaba -en línea con el contenido de la encíclica de Pío XI sobre la educación cristiana de la juventud, tantas veces citada por la jerarquía-⁽⁶⁸⁾ fuertes reacciones en las filas católicas: el de la coeducación.⁽⁶⁹⁾

Con fecha 30 de septiembre de 1931 había publicado la "Gaceta" el decreto del día 29 anterior por el que venía a establecerse dicha coeducación en todas las Escuelas Normales del Estado. De la regulación contenida en esta disposición cabe inferir que era intención del ministerio de Marcelino Domingo establecer, poco a poco, este sistema de enseñanza al menos en el ámbito de la educación primaria, (si bien no tendría más que una limitada implantación y

(68) "Igualmente erróneo y pernicioso a la educación cristiana es el método llamado de la 'coeducación', también fundado, según muchos, en el naturalismo negador del pecado original, y además, según todos los sostenedores de este método, en una deplorable confusión de ideas que trueca la legítima sociedad humana en una promiscuidad e igualdad niveladora. El Creador ha ordenado y dispuesto la convivencia perfecta de los sexos solamente en la unidad del matrimonio, y gradualmente separada en la familia y en la sociedad. Además, no hay en la naturaleza misma, que los hace diversos en el organismo, en las inclinaciones y en las aptitudes, ningún motivo para que pueda o deba haber promiscuidad y mucho menos igualdad de formación para ambos sexos. Estos, conforme a los admirables designios del Creador están destinados a completarse reciprocamente en la familia y en la sociedad, precisamente por su diversidad, la cual por lo mismo debe mantenerse y fomentarse en la formación educativa, con la necesaria distinción y correspondiente separación, proporcionada a las varias edades y circunstancias". (Encíclica "Divini Illius Magistri", 1929).

(69) Ver en la nota 95 las conclusiones aprobadas por la Asamblea de Padres de Familia celebrada en Madrid en el mes de noviembre y en las que, según parece, se confunde la coeducación con la enseñanza mixta.

y ya avanzado el año 1933) (70)

Seria, como decimos, la de Palencia, la única diócesis que, en forma muy aislada y fragmentaria tocó este tema en una sección de su Boletín denominada "Crónica general" y bajo un título que, en puridad, excedía con mucho del calificativo que podía darse a la reforma, enlazando cualquier nueva propuesta progresista con actitudes laicizadoras. Se refería, así, el cronista a la publicación de "una disposición" que establecía "la coeducación en los centros de segunda enseñanza, y principalmente en las Escuelas Normales"; (71) sobre esta noticia, en forma muy alarmista y ambigua, se limitaba a comentar: "lo que pueda significar esto lo saben los legisladores y lo sabemos todos, y porque lo sabemos nos aterra pensar las consecuencias de tal dispo-

(70) Este era el contenido de dos de las normas del decreto citado:

"Artículo 29.- Las Escuelas Normales son centros docentes a quienes se confía la formación profesional del magisterio primario. Se organizarán en régimen de coeducación y con profesorado masculino y femenino,

"Artículo 14.- ...

Quando las necesidades de la enseñanza lo aconsejen, las maestras formadas en las nuevas "Escuelas Normales del Magisterio Primario" podrán ser destinadas a Escuelas de niños, comenzando por adscribirías a las primeras clases de las Escuelas graduadas para varones, en tanto no se extienda a toda la enseñanza primaria el régimen de la coeducación."

(Decreto de 29 de septiembre de 1931.- "Gaceta de la República" de 30 de septiembre de 1931, pág. 2091).

(71) La referencia no era exacta por cuanto el decreto de 29 de septiembre regulaba única y exclusivamente las escuelas de magisterio, sin tratar en absoluto el ámbito de la segunda enseñanza. Sobre esta cabe decir que un decreto de 28 de agosto publicado en la "Gaceta" del día siguiente, había establecido que los dos institutos femeninos existentes en Madrid y Barcelona se someterían "al régimen general de los demás centros de su grado y abrirán su matrícula indistintamente a los alumnos de uno y otro sexo". Tal regulación no implicaba, no obstante, la coeducación, ya que el régimen general existente era el de la enseñanza mixta y, como se ha señalado, inicialmente el Ministerio de Instrucción Pública sólo aludía a la coeducación en relación con la enseñanza primaria, razón por la cual, precisamente, pasó a implantarse entre los que debían impartirla.

sición".⁽⁷²⁾

Serían, no obstante, entre las consultadas, la diócesis de Málaga y archidiócesis de Zaragoza las últimas en publicar en sus boletines eclesiásticos documentos tratando el tema de la enseñanza religiosa casi en forma inmediata a que el artículo que regulaba el tema de la educación fuera abordado por las Cortes constituyentes.

El Dr. Manuel GONZALEZ se limitó para referirse a la cuestión, y con independencia de cuanto acontecía en el seno del Parlamento, a reproducir un artículo escrito por él años atrás, ante la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que también realizara "un Gobierno Romanones" y que ahora era publicado con el título "Contra los herodes del día":

"Hace unos veinte años, siendo Arcipreste de Huelva, ante un ataque agudo de laicismo de un Gobierno Romanones, escribí este artículo que publico hoy sin tener que quitar ni poner una letra y encareciendo con todo interés la lectura atenta y la práctica sana de sus indicaciones contra la invasión de odio al alma del niño que nos amenaza."

No cabe duda que, a pesar de la afirmación del obispo, la reproducción de su escrito nada o muy poco tenía que ver con la actualidad y con la línea seguida por el resto de los prelados en 1931, tanto por el tono irónicamente despectivo que utilizaba para referirse al contexto político de la época y que difícilmente conciliaba con la actitud ahora mantenida por la jerarquía ante el nuevo régimen como por los remedios que proponía para hacer frente a la amenaza de laicización de la enseñanza.

(72) s.f. "Crónica General.- El laicismo en acción". BOE de Palencia, año 81, 9 de octubre de 1931, núm. 22, pág. 575.

Había descrito el entonces arcipreste como contra aquel proyecto de decreto se habían alzado numerosas protestas de los fieles, lo cual era muestra de la fe católica de la nación, preguntándose si tal reacción sería suficiente para hacer desistir al gobierno de su propósito. No era esto, sin embargo, lo importante para el Dr. GONZALEZ, ni siquiera el análisis de las causas que llevaban a las autoridades políticas a dictar la nueva disposición, muestra, simplemente, de la impiedad que "llamase judaísmo, masonería, revolución mansa o fiera hace hoy por hoy cuestión de gabinete la guerra al Catecismo".

"...Bien están las protestas escritas y habladas contra el Decreto, muy bien está eso, y, mientras más se chille, mejor, que en estas democracias de pamama que padecemos, el que más grite, más saca; pero me parece que ha de ser más fecunda esta: que a más gritos de nuestros enemigos contra el Catecismo opongamos más trabajo por enseñarlo..."

"Mientras más catecismo enseñemos, habrá más y mejores cristianos, y mientras más y mejores cristianos haya, más y más valientes ciudadanos habrá que se opongan a los planes laicos y secularizadores de este y de todos los Gobiernos españoles reñidos con la Historia de España."

Por ello proponía que todos los fieles católicos propagaran, leyeran y enseñaran el catecismo y concretamente, entre otras recomendaciones, que los párrocos o coadjutores fueran "por lo menos una vez a la semana, a las Escuelas nacionales a enseñar la doctrina", que se contribuyera económicamente "a la creación y sostenimiento de escuelas netamente católicas" y que se ayudara "a la formación de Internados para formar maestros católicos".⁽⁷³⁾

(73) s.f. "Contra los herodes del día". BDE de Málaga, año 64. 15 de octubre de 1931. núm. 11, págs. 409-414.

Si bien el arzobispo DOMASNECH siguió sin dictar personalmente disposiciones o comentarios que orientaran a sus fieles, no por ello se descuidaría la cuestión de la enseñanza en la archidiócesis de Zaragoza, cuyo boletín, como se ha indicado, destaca precisamente en este período por la reiteración con que publicó en sus páginas textos relativos al tema, línea que continuaría a mediados de octubre mediante la inclusión de una nota del "Moderador Diocesano del Catecismo" en la que se expresaba la necesidad de difundir la doctrina cristiana como modo de fomentar la rectitud de conducta de los hombres, dando una serie de instrucciones ante las disposiciones dictadas por el gobierno provisional. Destaca en esta nota el que, junto a las recomendaciones usuales en materia de enseñanza catequética en las escuelas oficiales, se insistía especialmente en que esta fuera impartida por los maestros y se hiciera por primera vez referencia a la propia formación de estos, obviando, al tiempo, referencia alguna al decreto de 29 de septiembre, que tanta alarma había causado al cronista de Palencia:

"Sin religión no hay salvación para la sociedad, porque la religión es la única antorcha que puede iluminar al hombre por los intrincados caminos de la vida. Digan lo que quieran los partidarios de la enseñanza laica, sin religión no puede haber moralidad;... porque sin Dios, ni hay preceptos, ni ley moral, ni distinción entre acciones buenas y malas.

....

«En las circunstancias actuales en que todo es hostil a la enseñanza de la doctrina cristiana, en que se permite a los alumnos del magisterio no estudiar religión, y a los maestros de escuela el no enseñarla, y se hace depender la enseñanza del catecismo a los niños de que los padres lo pidan, es preciso que los sacerdotes y catequistas renovemos nuestro celo...»

Este celo habia de llevar a los parrocos a influir cerca de los maestros para que siguieran impartiendo el catecismo, designando, en caso de que no desearan hacerlo, al sacerdote más apropiado para esta misión.

"Recomendamos... a los Parrocos, que pongan su interés e influencia para conseguir que sean los mismos señores Maestros los que se encarguen de la enseñanza religiosa, y esto, aun cuando en algún caso concreto pueda parecer al Párroco que ha de ser más provechosa la enseñanza dada por un sacerdote que dada por el maestro."

Ante este interés, cuya base no podía ser otra, como hemos visto en otros escritos eclesiásticos, que el lograr que la religión no solo no quedara desgajada del resto de la enseñanza sino que informara todos sus contenidos, y dada la opción voluntaria sobre esta asignatura introducida por la circular de trece de mayo, es lógico que el moderador se refiriera a la formación de los estudiantes de magisterio:

"...A ningún católico se ocultará el peligro gravísimo que envuelve el que los aspirantes a Maestros de nuestros niños no estudien religión, porque ¿cómo van a enseñar lo que no saben?. Un maestro irreligioso y descreído, con su influencia en las tiernas almas de los niños ¿no constituirá un peligro de perversion casi inevitable para sus alumnos?. De aquí que roguemos a los padres, profesores, Directores de Colegio y a cuantas personas puedan influir en el ánimo de los alumnos del Magisterio, que procuren que estos se matriculen en religión, y que estudien esta asignatura por amor de Dios con igual o mayor ahínco que si fuera obligatoria, y den valor oficial a su estudio."

Junto a estas recomendaciones acababa la nota señalando a los parrocos que siguieran visitando las escuelas semanalmente para enseñar la doctrina cristiana, en una labor que parece complementaria de la que pudiera llevar a cabo el propio maestro o el sacerdote designado para tal misión, ayudando para ello a una base jurídica cuya fuente no espe-

cificaba, ("... pues sigue en vigor a este respecto la disciplina anterior, y no les ocultará la trascendencia que en los momentos actuales tiene el que hagamos uso de este derecho"), así como recomendando al clero y a los catequistas "la mas encendida caridad y el celo mas entusiasta". (74)

6. La cuestión de la enseñanza en la Constitución y la conferencia de metropolitanos de noviembre de 1931.

Entre los puntos de conciliación que, proximo el debate constitucional, fueron planteados por el nuncio y el cardenal de Tarragona en la reunión mantenida con el presidente del Gobierno provisional y el ministro de Justicia el catorce de septiembre, habia uno que tocaba directamente el tema de la enseñanza. No obstante, al referirse a él, y pese a cuanto la jerarquía llevaba expuesto sobre este tema, tanto individualmente como en los documentos colectivos, no formularon los altos dignatarios eclesiásticos observación alguna sobre la supresión o continuidad de la instrucción religiosa en los centros dependientes del Estado o sobre el desgajamiento que esta materia habia sufrido del resto de las asignaturas del programa escolar. Su exposición se contrajo a la cuestión de la libertad de enseñanza, recabando la posibilidad de crea-

(74) s.f., "La enseñanza del catecismo", BOE de Zaragoza, año 70, 16 de octubre de 1931, num. 20, págs. 117-118.

ción de centros privados que solo estarían "sometidos a la inspección del Estado en cuanto a la fijación de un plan mínimo de enseñanza, expedición de títulos profesionales y salvaguardia de la moralidad, higiene y seguridad del Estado". Este punto, a diferencia de otros de los planteados, no fue objeto de aclaración alguna posterior en la reunión que el día 18 mantuvo la comisión de metropolitanos con ALCALÁ ZAMORA.⁽⁷⁵⁾

Ya se ha aludido en otros lugares a las disparidades existentes entre las propuestas eclesásticas y el resultado de los artículos del texto constitucional. En lo que atañe a la enseñanza la solución definitiva dada por las constituyentes no podía llevar derroteros distintos.

Próximo a iniciarse en la Cámara el debate de los artículos de la Constitución relativos a la enseñanza (48, 49 y 50 en el texto definitivo), se producirían diversas manifestaciones de estudiantes católicos protestando por el contenido del artículo 24 (26 del texto definitivo) en lo que se refería a la prohibición del ejercicio de la enseñanza a las órdenes religiosas. Así, al día siguiente de la aprobación de este artículo, la Asociación Universitaria de Estudiantes Católicos⁽⁷⁶⁾ convocó una huelga de veinticuatro horas en la Universidad de Barcelona, huelga que estuvo acompañada de manifestaciones por las calles de la ciudad bajo el lema "viva la libertad de enseñanza" y con vitores a CAMBO, ANGUERA DE SOJO, MAURA, ALCALÁ ZAMORA y a la República;⁽⁷⁷⁾ también en Bilbao los estudiantes de la Escuela de Comercio, del Instituto y de la Escuela de inge-

(75) Ver la nota 152 del capítulo "La Constitución de 1931".

(76) Ver la nota 95 y el apéndice núm. 13.

(77) "El Sol", 16 de octubre de 1931.

nieros industriales, hicieron el día 17 una huelga similar manifestándose a favor de la libertad de enseñanza y visitando las redacciones de los periódicos "para protestar contra la enseñanza laica".⁽⁷⁹⁾ por último, y aunque la noticia no precise el motivo, también los estudiantes católicos de Valencia celebraron una reunión el día 21 que dio lugar, como había pasado en Barcelona, a distintos enfrentamientos con estudiantes de la F.U.E.⁽⁸⁰⁾

En el marco de este ambiente universitario comenzaría el debate de los artículos anteriormente citados que contendrían el diseño definitivo, a nivel constitucional, de las líneas maestras que en el futuro habrían de regir la enseñanza y que, no obstante la oposición de los elementos católicos, supondrían un resquicio de luz para el futuro de la educación religiosa. Como Angel OSSORIO Y GALLARDO indicaba al cardenal VIDAL en la carta que le escribiera el 21 de octubre explicándole las razones de su silencio en el debate, el texto definitivo del dictamen de la comisión aceptaba "explícitamente" "la existencia de establecimientos privados de enseñanza".⁽⁸¹⁾ Este hecho era relevante para el diputado independiente y también para el cardenal, que, en la carta que el día 22 enviara al Secretario de Estado vaticano comunicándole sus últimas impresiones acerca de la situación político-religiosa en España, comentaba la aprobación de los nuevos preceptos señalando como tras "diversas gestiones cerca de parlamentarios afines en favor de la libertad de enseñanza"⁽⁸²⁾ no había sido posible mejorar el texto definitivo, el cual, "no ciertamente

(79) *Ibid.*, 22 de octubre de 1931.

(80) *Església i Estat durant la segona...*, I, pág. 420-421.

(81) Sobre las sugerencias efectuadas por el enviado del cardenal VIDAL, Dr. CARRERAS, en relación con el artículo 48, ver op. cit., pág. 260, nota 32 y pág. 426, nota 14.

satisfactorio", reconocía, no obstante, "explícitamente" la enseñanza privada; esto era para el cardenal un "hecho verdaderamente significativo, puesto que se rechazó una enmienda en la que se proponía la exclusión del profesorado eclesiástico y religioso" (42) y (43).

Los artículos aprobados suponían, en efecto, que si bien las órdenes religiosas no podían, como tales, sostener y regir establecimientos docentes, sus miembros podrían seguir participando en la enseñanza en los colegios que, a tales efectos, pudieran mantener los fieles católicos, fórmula que la Constitución permitía y que daba un respiro a la Iglesia respecto a la continuidad de la enseñanza de carácter religioso. (44)

(42) Op. cit., págs. 422-428.

(43) La enmienda a que aludía el cardenal había sido presentada el día 18 por los radicales socialistas, proponiendo una redacción alternativa al artículo 47 del proyecto (49 en el texto definitivo) y en ella se indicaba que los establecimientos privados "...necesariamente han de estar servidos por profesores seculares". Sobre esta enmienda, la forma en que fue rechazada y las posibilidades que ello entrañaba, ver la carta de Osorio y Gallardo al cardenal Vidal del 24 de octubre (Op. cit., págs. 425-437 y notas 2 y 4).

(44) Es interesante recordar aquí que el 25 de octubre, es decir, casi simultáneamente a la aprobación de los artículos de la Constitución sobre enseñanza, habían salido para Roma los doctores CARRERAS y VILAPLANA como enviados del nuncio y del cardenal Vidal para exponer ante el Vaticano la conveniencia de que hubiera un embajador de la República ante la Santa Sede así como para informar de la situación político-religiosa en España. En el informe que sobre este último punto elevaron al Secretario de Estado vaticano, cardenal PACELLI, destaca, en lo relativo a la enseñanza religiosa, su alusión a cómo en el periodo precedente el clero, contrayendo, a su juicio, una gran responsabilidad, no había hecho uso del derecho de intervención en la enseñanza religiosa impartida en las escuelas públicas, lo que tenía la consecuencia de que, salvo en los casos en que por el celo personal del maestro se actuaba en otra forma, la instrucción dada en ellas era prácticamente laica o, si se enseñaba el catecismo, era en forma puramente recitativa. Esta descripción de los Dres. Carreras y Vilaplana explica la razón de la insistencia de la jerarquía en la actuación de los párrocos y el contenido concreto de la nota del "Moderador Diocesano del Catecismo" publicada en el boletín eclesiástico de la diócesis de Zaragoza del 16 de octubre. En el informe no debía de olvidarse también a la influencia ejercida por los intelectuales

No obstante y como es lógico, la crítica oficial de la jerarquía al contenido de los preceptos constitucionales fue totalmente contraria, especialmente porque en ellos, aparte de proclamarse el laicismo en la enseñanza, se negaba en su ámbito cualquier espacio a la Iglesia. De esta forma, en la ya citada publicación del texto de la Constitución y de los comentarios al mismo hecha por el Dr. Félix BILBAO UGARREIZA²⁵ se subrayaron los artículos 48 y 49 haciendo resaltar la diferencia entre su contenido y las propuestas eclesásticas, algunas de las cuales se habían concretado en la anteriormente aludida reunión del 14 de septiembre:

"Art. 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.

«La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

«Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.

«La República legislara en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.

«La enseñanza será laica, hara del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

«Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

²⁵ Formados en la "Institución Libre de Enseñanza", que propugnaba el laicismo en la cultura y que había formado "elementi attivi nel magistero spagnolo". En su referencia a la enseñanza acababa el informe indicando que sería esta la cuestión en que había de sostenerse la batalla más fuerte, señalando como los partidos de izquierda, inspirados en las actuaciones habidas en la primera década del siglo, patrocinaban la escuela laica, obligatoria, igualitaria y gratuita. (*Iglesia i Estat durant la segona...*, tomo II, págs. 64 a 105).

(25) Ver el capítulo "La Constitución de 1893".

«Art. 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que estableciera las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinara la edad escolar para cada grado, la duración de los periodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.»⁸⁶⁾

Por los nuevos artículos, en consecuencia, la Iglesia no sólo no podría fundar centros docentes sino que incluso en aquellos creados para el estudio de su doctrina habría de estar sometida a la inspección del Estado; por otra parte se proclamaba que la enseñanza debería ser laica, ahora bien, el sistema de escuela única quedaba sustituido por el de "escuela unificada", términos con los que se aludía más que a la obligatoriedad de la enseñanza oficial, como la jerarquía había interpretado y quiso posteriormente interpretar, al enlace continuado entre la enseñanza primaria y la secundaria, y la enseñanza, incluida en el término genérico de cultura, no se estructuraba como función de la exclusiva competencia estatal, sino tan sólo como una de sus atribuciones esenciales, si bien al Estado, contrariamente a lo solicitado por la jerarquía eclesiástica, correspondía con carácter exclusivo la expedición de títulos y el establecimiento del contenido de los planes pedagógicos. Estos planes serían determinados por una anunciada "Ley de Instrucción pública", así como las condiciones que habrían de regir los establecimientos privados, con cuya alusión quedaba descartado el posible monopolio estatal de la enseñanza oficial.

86) *Documental*, núms. 1, 2 y 3 de 1932.

Estas determinaciones se destacarían, no obstante, por el indicado método del subrayado, no comentándose en el ámbito de la educación más que el artículo 48 con unas frases que defendían el derecho de la Iglesia, con independencia de cualquier otra potestad, respecto a la educación de los niños y reiteraban la condena de la escuela "neutra" o "laica".⁽⁸⁷⁾

Si bien el mismo capítulo II del Título III de la Constitución regulaba tanto la familia como la educación (se refería, concretamente, a "Familia, economía y cultura"), dado que el comentarista se limitó a subrayar todo cuanto en las determinaciones constitucionales era contrario a la doctrina de la Iglesia Católica, quedaron sin resaltar las obligaciones que, en materia de educación, imponía a los padres el artículo 43 de la Norma Suprema, al establecer: "Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución."

(87) "Constituye un código sobre materia de enseñanza la encíclica *Divini illius*, de Pío XI, 21-12-1929. La educación es obra necesariamente social y no solitaria. Tres sociedades hay en el seno de las cuales nace el hombre: la familia, instituida inmediatamente por Dios para un fin suyo propio, cual es la procreación y educación de la prole; la sociedad civil, para procurar el bien temporal, la cual debe proteger este derecho de la familia y la prole, y promover la educación e instrucción...; y la Iglesia, sociedad sobrenatural, a quien supereminentemente toca la educación por el doble título de suprema autoridad de magisterio y de maternidad sobrenatural, independientemente de cualquier potestad terrena, tanto en el origen como en el ejercicio de su misión educativa, no sólo a su objeto propio, sino también respecto a los medios necesarios y convenientes para cumplir-la. Es contraria a los principios fundamentales de la educación la escuela llamada "neutra" o "laica", de la que está excluida la religión, que de hecho viene a hacerse irreligiosa. La asistencia a estas escuelas católicas, neutras o mixtas, está prohibida a los niños católicos. V. las proposiciones 45 y 47 del *Syllabus*." (Ibídem)

No es lógico suponer que en el análisis que posteriormente harían algunos miembros del episcopado de los preceptos constitucionales tan solo se remitieran a lo que, quedando así destacado, era contrario a los principios religiosos; sin embargo si es cierto que este precepto nunca fue comentado por la jerarquía y que esta, en ocasiones, ignorándolo totalmente, -cuando bien podía haberlo utilizado en favor de su discurso- quiso demostrar que el diseño de la educación que la Constitución hacía, no solo iba en contra de los derechos de los padres sino que ni tan siquiera se refería a ellos. Sobre esto hay que indicar que, desde luego, una cosa era la obligación paterna sobre la educación de los hijos, constitucionalmente proclamada, y otra muy distinta la libertad de opinión que en este punto pudiera dar a los padres la ley fundamental al diseñar una determinada forma de enseñanza oficial o las Cortes constituidas al desarrollar la referencia a la enseñanza privada que hacía el artículo 49, cuestión esta en la que los prelados insistieron especialmente en defensa del derecho de los padres a optar a una enseñanza de carácter confesional; pero también es cierto que algunos miembros del episcopado, exagerando sus argumentaciones, no solo ignoraron este precepto sino que intentaron explicar que el Estado, de acuerdo con los artículos 48 y 49, podía llegar a arrogarse aquella obligación e imponer, en consecuencia, incluso coercitivamente, un sistema de enseñanza que, en puridad, dejaría sin contenido la primaria responsabilidad de los padres reconocida en el artículo 43. Ejemplos de tal proceder serían, como veremos, las pastorales del obispo de Gerona de 18 de mayo de 1932, del obispo de Segovia de 14 de agosto de 1933 y, sobre todo, del obispo de Palencia de 29 de octubre de 1933, en la que, dando continuidad a sus argumentaciones contra la escuela única, las llevara al extremo de conjeturar como posible la mas total injerencia estatal.

Es de destacar ahora que las antedichas anotaciones del Dr. Felix EILBAO que, aunque lógicamente elaboradas a finales de 1931, no serían incorporadas a los distintos boletines eclesiásticos hasta la aparición de los primeros cuadernillos del "Documental" en 1932, fueron, no obstante el contenido de los artículos citados -y dejando aparte, claro está, el documento colectivo de diciembre a que seguidamente se aludirá-, casi las únicas manifestaciones que sobre la cuestión de la enseñanza religiosa en los centros oficiales, realizó la jerarquía en lo que restaba de 1931.

Cabe suponer que la causa de este silencio venía motivada porque, como se ha señalado, tras la aprobación del artículo 26 en la noche del 13 al 14 de octubre, la conferencia de metropolitanos de 1931, comenzó a plantearse, tal como el cardenal VIDAL exponía en la carta enviada al cardenal PACELLI el día 16, la conveniencia de redactar un nuevo documento colectivo.⁽⁸⁸⁾ Ya se ha hablado de la preparación y desarrollo de dicha conferencia, reunida en Madrid, a convocatoria del cardenal de Tarragona, los días 18, 19 y 20 de noviembre, en la que se acordó que, una vez promulgada la Constitución, se publicaría un documento para orientación de los fieles y protestando por las ofensas inferidas a la Iglesia, entre ellas, en línea con lo requerido por Pío XI en su "Gravis theologi sententia",⁽⁸⁹⁾ las relativas a la escuela laica.

(88) Ver el capítulo "La Constitución de 1931".

(89) Ver la nota 259 del capítulo citado. Recordamos aquí que el punto 7 de este documento señalaba: "Speciali modo commendatum est ut contra scholas laicas omni conatu invehantur, quemadmodum anno 1879 in Belgio ab episcopis factum est".

Al margen de dicho acuerdo y dada la clara laicización de la enseñanza decretada por el artículo 48 de la Constitución, que hacía prever el fin de la vigencia del decreto de 6 de mayo, la conferencia trató también de la necesidad de intensificar la enseñanza del catecismo, determinando que los preladados instarían a los párrocos, ecónomos y encargados de iglesias a que, además de los días festivos, procurasen enseñar la doctrina a los niños "a lo menos tres días a la semana, en los templos o lugares adecuados, por espacio de media hora", así como a que organizaran la debida cooperación de los seglares, todo ello "con el fin de suplir la ausencia de enseñanza religiosa en las escuelas públicas". Otro extremo acordado a iguales efectos y dada la posibilidad de implantación de establecimientos privados a que aludía el artículo 49, fue el relativo a la creación de escuelas parroquiales, debiendo los párrocos procurar que, donde fuera posible, hubiera una escuela en su feligresía "sostenida por los vecinos del pueblo".⁽⁹⁰⁾

Como se ve, y lejos de la política eclesiástica aconsejada en la citada nota del "Moderador diocesano del Catecismo" de Zaragoza, los metropolitanos, una vez aprobados los artículos constitucionales relativos a la enseñanza, elegían el camino de la acción paralela de la Iglesia, no propugnando, como hemos visto que hicieran los obispos de León o de Iruy antes del debate constitucional, la actuación cerca de los maestros, e intentando la creación de escuelas netamente católicas que pudieran ofrecer una enseñanza alternativa a la oficial.

(90) Puntos IX y I del acta de la "Conferencia de los Ritos, Metropolitanos celebrada en Madrid los días 18, 19 y 20 de Noviembre de 1931", *Esglesia i Éstas durant la segona...*, tomo II, págs. 109-119.

Por último, y respecto a las manifestaciones que los cardenales de Tarragona y Sevilla deberían hacer al presidente del Gobierno, la conferencia acordó que se solicitara la "concesión de libertad para abrir y actuar las escuelas católicas, protestando del rigor con que son tratadas por algunos Inspectores". (91) y (92)

7. Las últimas manifestaciones individuales de la jerarquía en 1931: la circular del arzobispo de Valencia exhortando la cooperación de los fieles en la enseñanza del catecismo y el discurso del obispo de Palencia contra la escuela única.

Como decimos, la génesis y culminación de estos acuerdos fueron probablemente la causa de la escasa dedicación que desde mediados de octubre hasta finales de 1931 prestara la jerarquía a la cuestión de la enseñanza; así, entre los boletines eclesiásticos consultados, tan solo

(91) Ibidem.

(92) En la reseña de la entrevista mantenida el mismo día 20 de noviembre, último de la conferencia de metropolitanos, por los cardenales VIDA e ILUNDAIN con AZARA, redactada por el cardenal de Sevilla y remitida por el de Tarragona al Secretario de Estado vaticano en carta del día 28, se comenta más ampliamente este punto infriniéndose de dicho comentario la actitud extremista de algunos inspectores de enseñanza por cuanto, según se indica, tomaban medidas arbitrarias "cerrando escuelas o colegios, e impidiendo la enseñanza religiosa, aun más rigurosamente que lo prescrito en disposiciones y decretos del Ministerio actual". Op. cit., pag. 80. En carta enviada a AZARA el día 24 anterior incluía al cardenal VIDAL, como recordatorio la nota que el e Ilundain le habían entregado sobre los puntos tratados en la entrevista; en séptimo lugar figuraba: "Escuelas católicas, Enseñanza del Catecismo." Op. cit., págs. 159-162.

los de la archidiócesis de Valencia y diócesis de Palencia contienen alusiones a este tema.

Se trata en el primero de una circular redactada por el Dr. Prudencio MELU ALCALDE el 16 de noviembre (es decir, en vísperas de asistir a la conferencia de metropolitanos) en la que se refería, dado el establecimiento de la enseñanza laica en la Constitución, a la "urgencia de la instrucción catequística", recordando, en línea con lo que posteriormente aprobaría la conferencia respecto a la cooperación de los seglares, como el canon 711 imponía el deber de "procurar que en todas las parroquias esté erigida la Congregación de la Doctrina Cristiana". La necesidad de esta Congregación ya había sido expuesta por el Dr. FARRADO GARCÍA en el mes de junio y, a raíz de la conferencia de metropolitanos, será cada vez más reiterada por la jerarquía como forma de coadyuvar a la enseñanza del catecismo.⁽⁹⁹⁾

En una exposición cuyo estilo y razonamiento contrastan con los hasta ahora vistos en otros miembros del episcopado, aludía el Dr. MELU ALCALDE a los males que podían acaecer a una sociedad que rechazara las enseñanzas de la religión, como ya hiciera el obispo de Loria en su pastoral de 10 de mayo pero con un criterio más ponderado en sus consideraciones sobre el ser humano. Así, diría el arzobispo que la ignorancia religiosa "constituye el principio y fun-

(99) El "Reglamento breve" de esta Congregación publicado en el Boletín Eclesiástico de la diócesis de Calahorra y La Calzada de 7 de octubre de 1932 la definía como "una asociación piadosa, canónicamente instituida por la Autoridad Eclesiástica Ordinaria y agregada a la Archidicasterio de Roma, compuesta principalmente de seglares, para promover la gloria de Dios, y salvación de las almas, mediante la enseñanza del Catecismo, especialmente a los niños". Op.cit., págs. 229-230.

damento de todos los males que padecemos" ya que "las concupiscencias y la soberbia, a que es tan dada nuestra naturaleza caída, han de causar necesariamente las torpezas del egoísmo y la ambición desmedida de goces y placeres" siendo solo la religión cristiana la que podía "ponernos en camino de las aspiraciones hacia el bien que sentimos todos, como natural consecuencia de nuestro principio en Dios creador y de nuestro destino para la eterna bienaventuranza."

Tras estas consideraciones rechazaba el Dr. MELO toda pugna entre cristianismo y progreso, indicando que intentar defender tal oposición era iruto de la ignorancia religiosa, de ahí la "extraordinaria urgencia" de la instrucción catequística para que "la confianza en la virtud del espíritu cristiano sea sólido fundamento de una fe viva, práctica y verdadera" y a fin de que el pueblo fiel viera como esta fe no era incompatible con la ciencia y conociera que la Iglesia había sido "la iniciadora de todas las mejoras sociales", no pasando muchas veces de promesas los beneficios dirigidos al "pobre pueblo" por sus enemigos.

Por todo ello, y dado que "las circunstancias requieren que redoblemos nuestro esfuerzo, pues la evidente realidad nos demuestra que es mucho lo que queda por hacer en lo que se refiere a la instrucción religiosa", dispondría que los párrocos dieran cuenta del estado de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en su religión y que sensibilizaran a los fieles para la debida cooperación "a fin de que el estudio y la enseñanza del Catecismo propague y extienda la instrucción religiosa para gloria de Dios y bien de la Patria".⁽⁹⁴⁾

(94) 16 de noviembre de 1931.- "Circular núm. 108.- Sobre la urgencia de la instrucción catequística". BOE de Valencia, 1 de diciembre de 1931, núm. 2436, págs. 381-384. (Ver el apéndice núm. 12)

El boletín eclesiástico de la diócesis de Palencia, por su parte, publicaría el 1 de diciembre el discurso pronunciado por el Dr. PARRADO con motivo de un homenaje que le tributo el pueblo de Villaherreros y en el que dio "una voz de alerta, que es también de alarma, contra la escuela única, obligatoria y laica que se trata de implantar en toda España".

No indica el boletín eclesiástico la fecha del referido homenaje, pero, como se ve, las palabras del obispo no eran del todo acordes con el contenido definitivo de los artículos de la Constitución.

Para el obispo palentino (y de ahí el contenido del boletín eclesiástico de su diócesis, uno de los que, como hemos visto, ~~mas~~ trataron el tema) el de la enseñanza "es, acaso, el problema ~~mas~~ grave que tenemos planteado en España", porque, como diría con frases de gran dureza, implicaba un atentado frontal contra la religión, indisoluble de las grandezas de la historia de España, y era una "incautación" de los niños para arrebatarles la fe, otra de la masonería; de ahí que los católicos tuvieran el derecho y el deber de exigir escuelas católicas "por todos los medios legítimos".⁽⁹⁵⁾

(95) Estos fueron los párrafos más relevantes del discurso del Dr. PARRADO:

"... soplan, y vienen de las alturas, vientos de fronda, que son vientos de opresión y de despotismo en lo que se refiere a la escuela...

...

"Porque ahora se trata de romper esa unión entre la Escuela y la Iglesia; de poner a la Escuela frente a la Iglesia; de levantar un templo, la escuela, contra otro templo, la Iglesia. Este de la enseñanza es, acaso, el problema más grave que tenemos planteado en España. Porque no es ya de

la incautación de nuestros bienes, de lo que ahora se trata; es algo mas grave. De lo que ahora se trata es de la incautación de vuestros hijos, os los quieren arrebatar para descatolizarlos; para extraer de sus almas aquella uncion sagrada, el sagrado crisma, con que se les ungió en el bautismo; para arrancar de sus almas la fe de Cristo. Para esto se habla de imponer una escuela unica, obligatoria y laica.

...

«Si el ideal que hoy impera en las alturas, y que se quiere imponer a toda España, tuviese realización, la Escuela seria la losa inmensa que dejaría aplastadas la Fe, la Religión y la Espiritualidad de España. Porque si nuestra Patria ha sido grande, si su Historia fue asombro del mundo, todo ha sido debido a su fe. Y sin la fe no lo volverá a ser.

«El esplendor moral, material y espiritual a que llegó España, y al que jamás ha llegado pueblo alguno, por su fe lo consiguió.

«Padecemos en España una congestión de masonería y esta es la que quiere imponernos la escuela unica.

...

«Teneis el derecho de exigir, el deber, la obligación de pedir que se os den escuelas católicas para vuestros hijos que son católicos, como lo sois vosotros; y, conscientes de vuestros deberes y obligaciones, es menester que os opongais por todos los medios legítimos, a los intentos de perturbación de vuestras conciencias y de las conciencias de vuestros hijos.»

(BOE de Palencia, año 81, 1 de diciembre de 1931, num. 25, págs. 761-763).

Este número del boletín eclesiástico palentino, en su sección "Crónica General" incluía también las siguientes noticias sucesivas de las cuales tan sólo una de ellas hemos visto reflejada en otros dos boletines eclesiásticos, lo que indica, una vez más, el interés de esta diócesis en insistir, bajo cualquier forma, en el tema de la enseñanza:

"la Asamblea Nacional de Asociaciones de Padres de Familia", - Alaba la crónica "los nobles empeños con que se defienden los derechos sagrados de los padres a la educación y cuidado de sus hijos". Añadiendo que "en otras circunstancias estas reuniones hubieran alcanzado, en todos los sectores, la resonancia que merecen" pero ahora "tal vez porque la atención se ve solicitada por otros mil acontecimientos distintos" había pasado casi desapercibida, mas reconocia su "importancia y oportunidad" pues era necesario "sembrar ideas, exponer iniciativas, dibujar planes, que en el futuro han de producir, a no dudarlo, los apetecidos frutos". Acababa resaltando la necesidad de "imitar en estas cosas al enemigo, que no duerne. Ni descansa, ni se desalienta en sus empeños, aunque de momento parezca que nada consigue." (Ibid, pag. 768).

De esta Asamblea, como hemos señalado, también dieron cuenta los boletines eclesiásticos de Tortosa (año 75, 15 de diciembre de 1931, núm. págs. 397-398) y de Orhuela, siendo este último el que con más detalle se refirió a ella indicando que su celebración había tenido lugar en Madrid los días 14 y 15 de noviembre y que entre los temas tratados destacó el análisis de los problemas planteados a los padres respecto a la educación de sus hijos por la nueva orientación de la enseñanza. El boletín de esta diócesis publicaba igualmente las conclusiones aprobadas en la Asamblea:

"Reiterar la necesidad de que todos los padres de familia exijan en las Escuelas públicas la enseñanza de la Religión católica.

"La Asamblea se pronuncia unánimemente contra el sistema de reeducación impuesto por el Estado en todos los Centros de segunda enseñanza, como criminal para sus hijos.

"La Asamblea pide la inmediata restauración de los Institutos Femeninos de Madrid y Barcelona,

"La Asamblea declara la necesidad de preocuparse por la enseñanza en las escuelas primarias y de las clases más necesitadas, proponiendo que todas nuestras organizaciones se interesen por la propulsión del sistema de becas, que con el auxilio necesario del Estado se llegue a facilitar la ascensión de los más humildes a los grados más altos de la cultura y a todas las profesiones, protestando al mismo tiempo de que con esta excusa, quiera imponerse a nuestro pueblo la tiranía de la Escuela Única y el monopolio docente.

"La Asamblea de Padres de Familia reivindica el reconocimiento de los derechos que les asisten con anterioridad a todos los que pueda invocar el Estado en orden a la educación y enseñanza de sus hijos.

...

"La Asamblea declara que el principio laico y monopolizador de la enseñanza contenido en el artículo 46 de la Constitución, atropella las más sagradas libertades y exige la unión de todos los ciudadanos para lograr su inmediata revisión.

"La Asamblea reclama la libertad de enseñanza como base de todas las libertades sociales.

"La Asamblea, que no admite la neutralidad en materia religiosa, se pronuncia abiertamente contra el laicismo en la enseñanza y pide, que no le sea negado a los niños el derecho al conocimiento de la verdad de la Religión católica, que es la de sus padres.

"Pide, por tanto, al Estado, que preste en todas sus escuelas estas enseñanzas, y caso de que no quiera darse satisfacción a este deber esencial, que se proceda al reparto proporcional del presupuesto

escolar para no privar a los católicos de la enseñanza que pagan, ni menos obligarles a pagar la que rechacen.

«La Asamblea aconseja a todas las organizaciones de Padres de Familia de España, especialmente a aquellas que radican en Centros importantes de enseñanza e instrucción, el establecimiento de residencias y servicios de asistencia y apoyo, para los hijos de los Padres de Familias, asociados, que residan en otra localidad y envíen a aquellas a sus hijos.

«Se acuerda iniciar una campaña por la libertad de enseñanza, que comenzará en Barcelona y seguirá en Madrid, Bilbao y otras capitales.

«Que de ningún modo, como consecuencia del indeseable propósito de querer implantar en España la escuela única, pueda imponerse a ningún joven el oficio o profesión que deba ejercer, dejando a cada cual esta selección, según sus aficiones, aptitudes y vocación debidamente aconsejados por los padres, que son los únicos que podrán apreciar estos extremos y nunca deben ser desposeídos por el Estado de este legítimo derecho. La función de este debe ser meramente auxiliar, facilitando elementos para encauzar debidamente el problema de la orientación profesional y proporcionar a unos y otros los medios necesarios para llevar a la práctica la realización efectiva de sus vocaciones.»

(I.e.f. "Acción Católica Asamblea Nacional de Padres de Familia, BOE de Orihuela, año 50, 1 de diciembre de 1931, núm. 21, págs. 382-384).

En relación con la campaña por la libertad de enseñanza que acabamos de ver aprobada en la asamblea, sería, no obstante, el boletín eclesiástico de Palencia el único, entre los consultados, que haría alusión a la prohibición gubernamental de su realización, impidiendo, en consecuencia, la celebración de un mitin por la Asociación Nacional de Padres de Familia en Barcelona, lugar en que, tal como había sido previsto, debería iniciarse dicha campaña. Ante este hecho el comentarista se preguntaría qué tenía el gobierno cuando "creyó un día que de un plumazo podía suprimir la enseñanza privada y crear la escuela única" señalando que tal vez no fuera lo mismo "hablar para halagar a las masas, que resolver esos trescos problemas, que surgen a veces en la gubernación de los estados," (I.e.f. "Por la libertad de enseñanza", BOE de Palencia, año 81, 1 de diciembre de 1931, núm. 25, pag. 769).

Por último, el número siguiente del boletín eclesiástico palentino incluiría en la misma sección de "Crónica General" y sin alusión concreta alguna, una reseña relativa a otro de los movimientos de señores católicos relacionado con la enseñanza titulada "La organización de estudiantes católicos", reseña en la que se limitaba a señalar que "parece que en todas partes se va notando un movimiento saludable hacia las organizaciones de estudiantes católicos", saliendo de la situación de "inconsciencia" en que se hallaban "por las propagandas extrañas y el no

haberse detenido ellos a estudiar el programa católico." (s.f., BOE de Palencia, 15 de diciembre de 1931, núm. 26, pág. 787).

Ya hemos visto al referirnos al inicio del debate constitucional de los artículos relativos a la enseñanza como las citadas organizaciones no habían permanecido pasivas ante el probable sesgo laicizador en que iban a plasmarse los preceptos de la Constitución. Por esporádicas noticias recogidas en la prensa parece deducirse que esta pasividad no duraría en lo sucesivo (noticia de conflictos estudiantiles en Madrid, publicada por "El Debate" el 8 de abril de 1932, noticia de enfrentamientos entre estudiantes católicos y la F.U.E. en Granada, publicada por "El Sol" el 4 de noviembre de 1932, etc.) y es que, tal como laconicamente indicaba el boletín eclesiástico de Palencia, también los movimientos católicos universitarios pasarían a reaccionar contra la política estatal que venía a unirlos con mayor fuerza que en el pasado.

Así lo había de señalar nuevamente el citado boletín eclesiástico al reseñar, ya casi a finales de 1932, que la Asamblea de estudiantes católicos que ese mismo mes se había celebrado en Cádiz lo había sido "con más entusiasmo que nunca", añadiendo que "los estudiantes católicos han patentizado una vez más que no se oponen las creencias religiosas a los verdaderos avances culturales" (s.f., "Crónica General", BOE de Palencia, año 82, 15 de noviembre de 1932, núm. 22, págs. 635); noticia esta que es necesario enlazar con la publicada en abril de ese mismo año por el boletín eclesiástico de Segovia dando cuenta de la constitución, en esa diócesis, de la "Asociación de Estudiantes Católicos" "con unos doscientos estudiantes de ambos sexos" resaltando "su entusiasmo y el deseo de hacer labor católica", motivos por los que el cronista veía la nueva asociación como "una sólida esperanza para el porvenir de la religión y de la patria".

Sería demasiado expuesto conjeturar que la incomodidad que podía provocar al gobierno este tipo de asociaciones en el seno de la Universidad le llevara a retirar la subvención concedida por el Patronato de Estudiantes a los estudiantes católicos; pero lo cierto es que este Patronato, dependiente de la Junta para ampliación de estudios, les había otorgado, igual que a la F.U.E., "creyendo que con ello lograría la paz espiritual", según se señalaba en la nota oficiosa del Consejo de Ministros celebrado el 8 de noviembre de 1932, una subvención de 500 ptas. Examinado tal acuerdo por el citado Consejo había sido revocado en base a que "dado el carácter laico del Estado, las Asociaciones, si tienen un carácter confesional, gozan, como no puede menos de acontecer, del apoyo y las garantías generales de la ley -afirmación que encierra un cierto contraste con lo que el decreto del día 23 de ese mismo mes reguló respecto a las asociaciones de padres de familia católicos, como en la nota 142 indicamos- mas no pueden recibir auxilio económico alguno", todo ello de acuerdo con el espíritu de la Constitución, ("El Sol", 9 de noviembre de 1932), (Sobre el predominio de la F.U.E., en el primer bienio de la Segunda República, dada la protección oficial, y la lucha contra este predominio por parte de la Federación de Estudiantes Católicos ver: RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la Segunda República española*, Madrid, 1969, págs. 145-146).

Nos queda señalar, para acabar con estas referencias a las asociaciones católicas, tanto de padres de familia como de estudiantes que, ya en 1933, "El Debate" publicó un número extraordinario con una extensa crónica sobre la Confederación de Estudiantes Católicos con motivo del decimoctavo aniversario de su fundación. Dado que en ella se explicitan sus fines y organización la incluimos en el apéndice (Ver el núm. 13).

8. La ratificación por las Cortes de las disposiciones del gobierno provisional sobre enseñanza religiosa y el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931.

Para ultimar la referencia a la actuación de la jerarquía eclesiástica sobre la cuestión de la enseñanza oficial durante 1931 queda por aludir a los párrafos en que el documento colectivo de 20 de diciembre trataba esta cuestión.***

En el primer borrador redactado por el cardenal VIDAL se afirmaba rotundamente al abordar este tema que "el laicismo obligatorio excluye el catecismo", afirmación que, en línea con la clase de acuerdos adoptados por la conferencia de metropolitanos, venía a dar por sentado que los preceptos constitucionales implantaban totalmente el laicismo en la enseñanza. Tal afirmación sería matizada en el texto definitivo a propuesta del obispo de Avila Dr. Enrique PLA Y DENIEL que, en la carta enviada al arzobispo GANDASEGUI en la misma fecha con que luego apareciera firmado el documento y en la que hacía diversas observaciones al texto conreccionado por VIDAL, manifestaba su preocupación de que se diera por confirmada esta posibilidad cuando cabía suponer la continuidad de la voluntariedad de la enseñanza religiosa en las escuelas estatales según el decreto de 6 de mayo y a pesar de la promulgación de la Constitución; por ello propondría la fórmula alternativa y menos comprometedora de "se impone como obligatorio el laicismo en (las escuelas oficiales)". Las razones de su argumentación se basaban en la referencia

(96) Sobre la génesis y contenido general del documento ver el capítulo "La Constitución de 1931".

al carácter voluntario de la enseñanza hecha por Rodolfo LLOPIS por aquellas fechas y en la actitud de los maestros de su propia diócesis, muchos de los cuales seguían enseñando el catecismo cuando los padres de los alumnos lo solicitaban mientras que otros entendían (como parece que hacían los metropolitanos, y entre ellos, el propio cardenal VIDAL) que la aprobación de la Constitución implicaba la prohibición de tal enseñanza en las escuelas oficiales, de ahí que apuntara la necesidad de consultar sobre la vigencia del decreto, al que, en todo caso, consideraba "menos malo".⁽⁹⁷⁾

No dejan de ser curiosos estos temores del obispo, reiterados en 24 de diciembre,⁽⁹⁸⁾ que revelan que la diócesis de Avila, a diferencia de otras, no hacía un seguimiento de las disposiciones oficiales, toda vez que la "Gaceta" de 6 de diciembre había publicado una ley del día 5 anterior ratificando, entre otras normas, tanto el decreto de 6 de mayo como la circular del 13, ratificación que venía a clarificar totalmente las dudas planteadas por el Dr. PLA Y DENIEL y la interpretación de los preceptos de la Constitución que, según parece, hacían los metropolitanos.

No obstante, el obispo de Avila no se enteraría de dichas disposiciones hasta bastantes fechas después de ser publicadas, como lo manifestaría al cardenal VIDAL en carta de 1 de enero de 1932, en la que señalaba que, ante tales hechos, era mejor que en la declaración colectiva no se hubiera utilizado la primitiva fórmula y que, de haber conocido entonces esta aprobación hubiera sido mejor "inculcar a los padres... el deber de pedir para sus hijos la

(97) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, págs. 285-287.

(98) *Ib.*, t.II, págs. 297-298.

instrucción religiosa".⁽⁹⁹⁾

Con esta actuación de las Cortes se cerraría 1931 en la misma línea legislativa iniciada a comienzos de la República y sin más manifestaciones del episcopado sobre este extremo que las palabras contenidas en el documento colectivo.

En la descripción de los atentados cometidos por el Estado contra la Iglesia con que comenzaba el documento figuraba su exclusión de "la educación de la juventud", explicitando el sometimiento a que se la obligaba respecto al poder civil, hasta el punto de que, por una parte, venía a consagrarse la libertad de opinión y la Iglesia quedaba bajo la inspección del Estado en la enseñanza de su doctrina en sus propios centros y, por otra, se establecía la libertad de cátedra y de enseñanza mientras que se imponía obligatoriamente el laicismo en las escuelas estatales. Por ello, comentando la actuación política en materia de enseñanza, reiteraría el documento, en su segunda parte, la doctrina de la Iglesia, tantas veces esgrimida, criticando el concepto de escuela neutra como "mutilación del hombre", por cuanto le privaba de la formación religiosa y moral, así como cualquier intento monopolizador del Estado que, "directa o indirectamente", obligara a acudir a sus escuelas, lo cual sería una violación del derecho general de los padres a la libre elección de enseñanza para sus hijos, un atentado al derecho docente de la Iglesia, tanto en escuelas propias como en las escuelas públicas y aun una negación del derecho de los niños y adolescentes a recibir enseñanza religiosa, sin la que "avezados a no negar nada a sus concupiscencias, serán llevados fácilmente a agitar la misma paz del Estado".

(99) Op. cit., págs. 352-353.

A tenor de esta exposición la declaración colectiva pasaría seguidamente a dar normas orientadoras sobre la actuación a seguir por los fieles. En ellas se instaría a que colaborasen en "las reivindicaciones escolares, que constituyen punto capital del programa restaurador de la legalidad española" para la defensa de los derechos anteriormente enumerados, de la libertad de enseñanza y, más aun, de la "repartición escolar proporcional", que había que defender -en frase un tanto inexplicable en el contexto de la función social de la enseñanza estatal, en la que, además, la misma iglesia reivindicaba su presencia-, "para que la escuela pública y privada rivalicen noblemente en la elevación progresiva de la cultura popular". El modelo a seguir en la actuación que se proponía, señalarían los obispos, podía estar inspirado en lo realizado por los católicos belgas, indicación con la que vendrían a recoger fielmente las palabras pontificias.⁽¹⁰⁰⁾

Y, siguiendo las directrices marcadas por el pontífice, insistían cerca de los fieles en la necesidad de "combatir la enseñanza laica" y "trabajar por la modificación de las leyes que la imponen", prohibiéndoles toda contribución voluntaria en instituciones que la tomasen por modelo o la promovieran. Junto a tal actuación contraria deberían también trabajar en pro de la escuela católica "aun creándola propia si es preciso y hay de ello posibilidades", lo cual ni sería una labor política ni iría en contra de la buena ciudadanía, antes al contrario. Y si algún padre católico se viera en la precisión de enviar a sus hijos a una escuela laica, necesario sería que vigilara la enseñanza que recibían y les procurasen la adecuada instrucción religiosa; admonición con la que el documento colectivo

(100) Ver la nota num. 29.

finalizaría la referencia a la cuestión de la enseñanza.

- (101) "Frente al monopolio docente del Estado y a la des cristianización de la enseñanza, no podemos menos que ser firmes en sostener a una los derechos de la familia, de la Iglesia y del poder civil en la convivencia armoniosa que exige la razón, el sentido jurídico y el bien común.

«No puede, sin violación del derecho natural, impedirse a los padres de familia atender a la educación de sus hijos, expresión y prolongación viviente de sí mismos, con la debida libertad de elegir escuela y maestros para ellos, de determinar y controlar la forma educacional en conformidad a sus creencias, deberes, justos designios y legítimas preferencias. No se puede, sin atentar a la propia maternidad espiritual de la Iglesia, desconocer u obstaculizar su derecho docente, a cuyo ejercicio debe la civilización su perfección y su historia, por el que no es lícito sustraerle los fieles, desde su tierna infancia, para la formación cristiana de su mentalidad, de su carácter y de su conciencia en escuelas propias y aun en las escuelas públicas. No se puede, sin deformar la indefensa y reverenciada conciencia de los niños y adolescentes, negarles su derecho estricto a recibir una enseñanza conforme a la doctrina de la Iglesia, a la cual pertenecen por la incorporación sacramental del bautismo, y, todavía menos, someterles a aquella mutilación del hombre por la escuela neutra, que así fue esta enérgicamente definida por los egregios doctor Llorca y Bages y Menéndez Pelayo.

«Applauso y colaboración habrá de merecer todo cuanto haga el Estado para el fomento de la cultura popular si no se deja llevar por el exceso de estatificar la enseñanza y se atiene a estas dos normas: es ilícito todo monopolio docente que, directa o indirectamente, oblique a las familias a enviar sus hijos a las escuelas del Estado, contrariando las obligaciones de su conciencia o aun sus legítimas preferencias. Sin una buena formación religiosa y moral, toda cultura de los espíritus será malsana; los jóvenes, no educados en el respeto de Dios, serán reacios a soportar disciplina alguna para la honestidad de la vida, y avezados a no negar nada a sus concupiscencias, serán llevados fácilmente a agitar la misma paz del Estado.

«5. No obraría como buen católico quien, en los actuales momentos, no colaborase en las reivindicaciones escolares, que constituyen punto capital del programa restaurador de la legalidad española para la defensa del derecho natural de los padres a escoger y dirigir la educación de los hijos; del derecho de los mismos hijos a que la formación religiosa y moral ocupe en su educación el primer lugar; del consiguiente derecho de la Iglesia a educar religiosamente sin trabas a sus fieles, aun en la escuela pública; de la justa libertad de enseñanza, sin la cual aquellos derechos no podrían ser efectivos, y de la repartición escolar proporcional que la justicia distributiva impone, para que la escuela pública y privada rivalicen nobilmente en la elevación progresiva de la cultura popular. Nunca los católicos se ocuparán lo bastante, aun a costa de los más grandes sacrificios, en sostener y defender sus escuelas, así como en obtener leyes justas en materia de enseñanza; sus éxitos en este orden serán su mayor gloria y la mayor eficacia de sus actuaciones, como lo han sido de los católicos belgas, que pueden servir de modelo en esta obra renovadora y constructiva.

16. No menor esfuerzo han de poner en combatir la enseñanza laica, trabajar por la modificación de las leyes que la imponen y bajo ningún concepto contribuir voluntariamente a las instituciones que en ella se inspiran o la promuevan. Así como procurando tener escuela católica para sus hijos, aun creándola propia, si es preciso y hay de ello posibilidades, los católicos no realizan de ninguna manera obra de partido, sino obra religiosa indispensable a la paz de su conciencia: ni se proponen separar a sus hijos del cuerpo y del espíritu de su nación, sino, al contrario, darles la educación más perfecta y más capaz de contribuir a la prosperidad del país, así también oponiéndose a los avances de la escuela laica, obra del Estado, impondrán la perturbación de la conciencia de muchos que, sin desear aquella, habrán de llevar a sus hijos a la escuela pública desecristianizadora, y contribuirán a evitar la segunda desmoralización del pueblo si progresase la escuela atea, en que, según la experiencia contemporánea ha demostrado, se convierte siempre la escuela laica y neutra, a despecho de lo que pregonan sus defensores. Y no hay que olvidar a este propósito las instrucciones de la Sede Apostólica acerca de las cautelas que han de poner en práctica los padres cuyos hijos se vean en la precisión de frecuentar la escuela laica, informándose de los textos que en ella se usen y de las doctrinas que en ella se enseñen, para exigir por todas las vías posibles que, por lo menos, nada se les enseñe opuesto a la religión y a la sana moral, sustrayéndolos diligentemente a la influencia de otros alumnos que pudieran pervertirlos; procurandoles fuera de la escuela una instrucción cristiana tanto más sólida cuanto su le falta en aquella mayor peligro."

(*Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, edición de Jesus Irribarren, Madrid, 1974, págs. 165 y 175).

Es relevante destacar que en esta fecha el episcopado obvió la referencia a la preceptiva intervención del ordinario para autorizar la asistencia a las escuelas laicas que establecía el canon 1374, punto este que en los comentarios al borrador del documento, ningún prelado señaló, utilizándose así, según parece, la fórmula implícita de una autorización genérica del episcopado con las cautelas que sobre vigilancia de textos, doctrinas, compañías e instrucción cristiana se señalaban. La pastoral colectiva de mayo de 1933, como veremos, cambiaría esta fórmula mediante una interpretación estricta del canon citado, debido, sin duda, al endurecimiento y extensión del laicismo en la enseñanza oficial que se produjo a lo largo de 1932.

9. Los comienzos de 1932: La circular de la Dirección General de primera enseñanza de 12 de enero dejando sin efecto la ratificación parlamentaria y declarando la total supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas primarias.

Al tiempo que la declaración colectiva del episcopado iba publicándose a lo largo del mes de enero en los distintos boletines eclesiásticos, se preparaba en la Dirección General de Primera enseñanza del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, regida por Rodolfo LLOPIS, una nueva disposición que, en puridad, venía a anular nuevamente los principios básicos de la producción del Derecho y de la jerarquía de sus fuentes.

En efecto, aun habiendo dado las Cortes de la nación fuerza de ley tanto al decreto de 6 de mayo de 1931 como a la circular del día 13, otra nueva circular volvía ahora -y más gravemente aun que hiciera aquella en sus ampliaciones- so pretexto de desarrollo normativo de una fuente inmediata a pergeñar las líneas maestras que habían de regular la enseñanza primaria estatal, para lo cual no sólo tomaba como punto de referencia básico el articulado de la Constitución, sino que venía a contravenir los preceptos de las disposiciones que las Cortes acababan de ratificar. La consecuencia de la publicación de esta nueva norma no era otra que el dar un paso más en la laicización de la enseñanza oficial.

De esta forma, el 14 de enero de 1932 publicaría la "Gaceta de Madrid" la circular del día 12 anterior que, estableciendo los principios fundamentales que habían de regir la enseñanza en las escuelas del Estado, erradicaría, en el objetivo de erradicar todo dogmatismo en la enseñanza primaria, la proscripción de la presencia de la religión en

las escuelas, de forma que, estableciendo -bajo un calificativo peyorativo y en contraste con la libertad de cátedra reconocida para niveles superiores de enseñanza- la interdicción de "toda propaganda política, social, filosófica y religiosa", incidiría especialmente, en este amplio abanico de prohibiciones (y aun haciendo mención expresa, por vía indirecta, a la extinta monarquía), en la enseñanza religiosa como finalidad esencial de la norma. Así, interpretando el artículo 48 de la Constitución y tomando su apoyatura en él, derogaría lo establecido en las disposiciones vigentes sobre la voluntariedad de la formación religiosa en las escuelas, pasando a prohibir totalmente su enseñanza durante el horario lectivo así como la presencia de cualquier tipo de emblema religioso en las aulas. El motivo esencial de la circular de eliminar la religión de la enseñanza oficial, le hacía señalar en sus últimos párrafos, paradójicamente, y como ya hiciera la circular de 13 de mayo de 1931, que sus disposiciones fueran cumplimentadas de forma que no pudieran "herir los sentimientos religiosos de nadie". (102)

(102) "La Escuela ha de ser laica. La Escuela, sobre todo, ha de respetar la conciencia del niño. La Escuela no puede ser dogmática ni puede ser sectaria. Toda propaganda política, social, filosófica y religiosa queda terminantemente prohibida en la Escuela. La Escuela no puede coaccionar las conciencias. Al contrario, ha de respetarlas. Ha de liberarlas. Ha de ser lugar neutral donde el niño viva, crezca y se desarrolle sin sojuzgaciones de esa índole.

"La Escuela, por imperativo del artículo 48 de la Constitución, ha de ser laica. Por tanto, no ostentará signo alguno que implique confesionalidad, quedando igualmente suprimidas del horario y del programa escolares la enseñanza y la práctica confesionales. La escuela, en lo sucesivo, se inhibirá de los problemas religiosos. La Escuela es de todos y aspira a ser para todos.

....

"Los señores inspectores cuidarán con el mayor celo que estas normas lleguen a conocimiento del Magisterio y que sean cumplimentadas inmediatamente en forma que no puedan herir los sentimientos religiosos de nadie, resolviendo cuantas dudas y reclamaciones puedan producirse en la aplicación de estas instrucciones". ("Gaceta de Madrid", 14 de enero de 1932).

10. Los primeros escritos de la jerarquía en el nuevo año: las circulares de los obispos de Coria y de Tuy ignorando la nueva disposición e insistiendo en la enseñanza de la religión en las escuelas.

Ajenos a estas nuevas disposiciones seguirían algunos obispos insistiendo en la obligación de instruir a los niños en la religión, en línea con lo ya enunciado en sus documentos de 1931. Así haría por aquellas fechas el obispo de Coria, Dr. Dionisio MORENO BARRIO, en una circular en la que, aludiendo especialmente al tema de la enseñanza religiosa, se limitaría a recordar escuetamente a los parrocos sus obligaciones sobre enseñanza del catecismo a niños y adultos y a transcribir sin comentario alguno las prescripciones del Código de Derecho canónico relativas a las obligaciones que sobre este extremo pesaban sobre sacerdotes y padres, al imperativo «difícil ya de conciliar con la nueva disposición» de que en los centros docentes de todos los niveles se impartiera la formación religiosa, a la prohibición de que los niños católicos asistieran a escuelas neutras o mixtas y al derecho de la Iglesia a establecer sus propios centros docentes; el obispo también incluía en su circular otros cánones "de indiscutible actualidad" sobre matrimonio y enterramientos.⁽¹⁰³⁾

También a mediados de enero el Dr. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, obispo de Tuy, trataría el tema de la enseñanza refiriéndose a él en forma específica en la circular que dictaría con motivo del comienzo de año dando una serie de

(103) (2 de enero de 1932).- "Circular núm. 29".- BGE de Coria, año 67, 9 de enero de 1932, núm. 26, págs. 404-411.

"ordenaciones" y "recomendaciones" para la diócesis. Aludiría en ella a la necesidad del apostolado de la catequesis pues "en todas partes el Herodes del laicismo y de la impiedad persigue al niño para perderlo...", razón por la que encarecía al clero que asumiera como prioritaria la enseñanza del catecismo y recababa el envío de determinados datos sobre su estado en cada parroquia.

Enlazando con este tema trataría también el prelado de la cuestión de la enseñanza oficial avisando de los graves peligros que representaba "la escuela obligatoria y laica". Esta alusión es en sí confusa pues da a entender que el obispo se refiere al principio, ya constitucionalmente descartado, de la "escuela única"; mas teniendo en cuenta que mas adelante recomendaría la creación de escuelas católicas hay que concluir que lo que pretendía indicar era que, habiendo quedado establecida la obligatoriedad de la primera enseñanza y siendo la escuela oficial laica, el peligro para los católicos radicaba en la unión de ambas premisas; siendo por tanto necesario separarlas y hacer que aquella obligatoriedad pudiera cumplirse en establecimientos que, al no ser oficiales, no tuvieran que ser laicos. Creemos que no cabe dar otra interpretación a esta frase, pues el entender que el obispo de Luj seguía refiriéndose en estas fechas a la obligatoriedad de la enseñanza oficial, no solo indicaría una ignorancia inexplicable de las determinaciones del artículo 49 de la Constitución, sino que resultaría contradictorio, como se ha indicado, con su exhortación a la creación de escuelas privadas.

Singular sería el comentario del Dr. GARCÍA respecto a la forma en que venía atacándose la escuela cristiana, pues, con el tono exagerado de muchos miembros del episcopado y obviando, desde luego, que el laicismo en la enseñanza había quedado proclamado a nivel constitucional, señalaría muy acertadamente, en forma simultánea a la aparición de la

circular de la Dirección General de Enseñanza primaria, lo siguiente:

"La tempestad que ya está descargando sobre la escuela en España, tempestad de laicismo, de irreligiosidad, de impiedad inmundas, está descargando casi sin ruido; son medidas particulares y locales, y cuando son generales, no son leves, sino ordenes y circulares, a veces de autoridades subalternas. Pero, así, sin ruido casi, van demostrando la escuela cristiana."

Es difícil precisar si el Dr. GARCÍA podía referirse a la circular del día 12 anterior -insertada en la "Gaceta" en la misma fecha en que viene suscrita la del obispo -por el conocimiento previo que la jerarquía pudiera tener de esta nueva disposición, tal como ya sucediera en mayo de 1931; sin embargo, del contenido aludido de las cartas del Dr. FLA Y DENIEL y de la que este escribiera al cardenal VIDAL el 16 de febrero, quejándose de que a pesar de la asunción por las Cortes del decreto de 6 de mayo, la última circular "lo echó por los suelos",⁽¹⁰⁴⁾ parece desprenderse que en esta ocasión tal conocimiento no había existido y, en tal caso, el comentario del obispo de Luján, más que cenirse a la actualidad del momento, se remontaría a las actuaciones primeras del gobierno provisional que, por otra parte, en las fechas de su escrito, ya tenían fuerza de ley.⁽¹⁰⁵⁾ Sea como fuere, no cabe duda que el comentario del prelado -muy desafiado o de plena actualidad- venía a ser ahora especialmente oportuno.

(104) *Esglesia i Estat durant la segona...*, 31, págs. 420-471.

(105) No obstante, si tomamos como ejemplo la simultaneidad existente entre las fechas en que se van produciendo las observaciones que después serían incorporadas al documento colectivo de 20 de diciembre de 1931 y a la que ya hemos hecho sucinta alusión al referirnos a la carta del obispo de Avila al arzobispo GARCASEGUI fechada el mismo 20 de diciembre, hay que concluir en la no fiabilidad de los datos con que los escritos de la jerarquía aparecen firmados (ver op. cit., págs. 282-298); de ahí que el que la circular del Dr. GARCÍA viniera fechada el mismo día en que apareció la del Director General de Enseñanza Primaria no sea

Tras esta denuncia pasaría el obispo a hacer una serie de recomendaciones a fin de que los fieles lucharan en contra de la escuela laica y defendieran la formación cristiana, recomendaciones que irían, en muchos casos, en línea con la declaración colectiva de 20 de diciembre. Les instaría, así, a "emprender la gran campaña contra la escuela laica y en favor de la enseñanza cristiana", campaña que, aparte de la difusión del catecismo y propaganda católica, implicaría "... limosnas en pro de los colegios católicos; fundación de escuelas privadas católicas...; actividad social y política para impedir las consecuencias funestísimas de las disposiciones anticatólicas que se van dando y para lograr cuanto antes que sean derogadas, todo por vías justas y legítimas y con el concurso de todas las buenas energías, como nos lo ha dicho el Romano Pontífice".

Mas en otros casos el obispo se apartaría de las pautas marcadas por el documento colectivo y en línea con su personal pensamiento, ya expresado en la pastoral de 12 de septiembre, iría mucho mas lejos de las directrices de aquel y, así, dirigiéndose a los propios maestros, les llegaría a pedir que no apostatasen de su misión de educadores cristianos (su lema -diría- habría de ser "¡antes el hambre, primero la muerte!") y, en coherencia con ello, incluiría en la campaña propuesta el "apoyo jurídico y social y moral y

bese suficiente para descartar el conocimiento de su publicación, una vez que ésta se realizara. Sin embargo, en este caso el documento del prelado no podía ser de fecha muy alejada a la del 14 de enero ya que fue publicado el día 18, último, por tanto, en que pudo ser suscrito. De ahí que creamos que tanto la certanía de la publicidad de ambos documentos como la falta de alusión expresa por parte del prelado a la circular gubernamental, son indicios suficientes para pensar que el obispo ignoraba, a pesar de sus frases, la existencia de la nueva disposición.

material a los maestros cristianos" y la "influencia por todos los medios justos y legítimos sobre los maestros, para que cumplan el deber que Dios mismo les impone de ser maestros católicos", propuestas, todas ellas, que, a pesar de la alusión anterior a "las disposiciones que se van dando" que, por su tono de actualidad, hace pensar, una vez más en la posibilidad de que el prelado conociera la circular del día 12, avalan la suposición contraria, toda vez que si tenían toda su lógica en la estructura anterior de la enseñanza oficial, que incluía la voluntariedad de la instrucción religiosa por parte de los maestros, suprimida radicalmente esta alternativa, significarían una verdadera incitación al Magisterio a oponerse a la disposición gubernamental o a trasvasarse masivamente a la enseñanza privada de carácter católico.⁽¹⁰⁶⁾

10. Las reacciones contra la circular de 12 de enero: obispados de Oviedo, Tarazona, Barcelona y Huesca.

Ya llegando a las últimas fechas del mes de enero, comenzaría la jerarquía a reaccionar claramente contra la circular del Director General de Primera enseñanza. Esta reacción fue manifestada con una contundencia y conocimiento de causa paradigmáticos en la circular que el día 25 escribiera el obispo de Oviedo Dr. Juan Bautista LUIS Y PEREZ y en la que con honda amargura se quejaba de la

(106) 14 de enero de 1932, "Circular dando ordenaciones y haciendo recomendaciones al empezar el año".- BOE de Tuy, año 73, 18 de enero de 1932, núm. 1, págs. 3-17. (Ver el apéndice núm. 14).

actitud de colaboración adoptada por la Iglesia desde los comienzos del nuevo régimen y los atentados que, como sucedía con la nueva disposición, venía este cometiendo contra ella. Ello suponía, a juicio del obispo, una creación artificiosa de problemas religiosos que adquiría relieves "de persecución real y efectiva", persecución que, añadida con espíritu conciliador, se realiza "tal vez sin intención manifiesta y deliberada de las autoridades superiores", mas el resultado no era otro que el de añadir "malicia sobre malicia".

Recordaba el obispo cómo en los primeros días del establecimiento de la República había aconsejado a sus diocesanos el acatamiento leal a los poderes constituidos en la esperanza, en la que aun confiaba, de "una colaboración de todos los hombres de buena voluntad" en orden a la consecución de la justicia, la paz, el progreso social y el desarrollo cultural y educativo, contando, para este último, "con la libertad de enseñanza sin la cual no podría existir entre nosotros ninguna verdadera libertad, ni gobierno que con justo título se llame democrático, si no garantiza y promueve las legítimas libertades individuales". De ahí que, abundando en este tema y entrando ya de lleno en el objeto de su circular, el Dr. LUIS Y PÉREZ pasara a denunciar tajantemente la nueva norma:

"Seguimos todavía esperando, tal vez contra toda esperanza, y por eso denunciarnos ante los Superiores, como un elemento contrario a la paz y disociador de los espíritus, la última circular del Sr. Director de Enseñanza ordenando la desaparición de la imagen de Jesucristo en las escuelas primarias y con ella toda enseñanza religiosa."

Tras ello pasaria a enjuiciar la razón de esta nueva regulacion que era, en su consideracion, totalmente injustificable, señalando que se podia acusar en ella un "exceso de celo", que queria creer motivado por la buena fe, mas, aunque así fuera, tal exceso de celo sería en sí mismo criticable al no ser otra cosa que un exceso de atribuciones, ya que, diria el obispo con acertado criterio:

"... disposicion tan grave prejuzga y coacciona la soberania de las Cortes y la autoridad del Gobierno que tienen anunciada una Ley sobre Enseñanza y excede por lo tanto las atribuciones de una Autoridad subordinada, que no sea suprema en la Nacion."

No pararian aqui, sin embargo, las fundadas criticas del prelado y, así, incidiria en aquel punto de la circular, que ya hemos destacado, en que se aconsejaba no herir los sentimientos religiosos de nadie y lo haria, nuevamente, con gran agudeza, enmarcada, claro es, en las coordenadas de las creencias que defendia:

"Tambien se acusa la buena fe en la Circular cuando se manda que no se hieran los sentimientos religiosos. Si para entender estas palabras, se suprime la buena fe, el consejo adquiere los caracteres de una cruel ironia o de una burla sangrienta. Porque ¿como puede ser que de una escuela catolica, frecuentada por alumnos bautizados con el bautismo de Jesucristo, dirigida por maestros catolicos sea retirado el Crucifijo sin herir los sentimientos religiosos de todos?."

Por ello, y a fin de defender a los niños, exhortaría a los diocesanos "a que eleven a las autoridades locales, como Nos lo hacemos por estas letras a la Suprema autoridad, una respetuosa y energica peticion, en virtud de derechos que están sobre toda humana criatura, para que se conserven en las escuelas las imagenes de Jesucristo y de la Santisima Virgen Maria y que se permita la ensenanza de la doctrina Catolica a todos los niños bautizados", todo ello en la esperanza de que "una peticion constante y decidida a no

dejar en el legítimo derecho sería muy pronto atendida, ya que una voz autorizada se ha servido declarar que el laicismo no es entre nosotros la irreligión y menos todavía la impiedad" y, contrariamente, la nueva disposición "vulnera las leyes divinas y eclesásticas en materia de educación" yendo contra los mismos fundamentos de esta.⁽¹⁷⁾

Coincidiendo con las protestas de este escrito que, como se ve, aunque aludía al tema fundamental de la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, insistía especialmente en el hecho de la supresión del crucifijo en las aulas, publicaría "El Sol" un artículo de D. Miguel de UNAMUNO en el que, con el título "Guerra civil cavernícola", criticaba duramente la nueva medida, si bien tomando como fundamento unos razonamientos muy distintos a los del obispo de Oviedo. Censuraba en su escrito D. Miguel a tirios y troyanos arremetiendo tanto contra la actitud de los católicos como, mas detenidamente, contra la de las autoridades políticas que pretendían "la imposición de un agnosticismo oficial pedagógico" cuando era, según él, impensable que los maestros nacionales pudieran educar a los niños españoles "escamoteando toda noción religiosa", pues ello equivaldría a ignorar "lo que tiene que ser la educación pública, patriótica".

Si para el Dr. LUIS Y PÉREZ el crucifijo representaba la imagen de la verdad y vida sobrenaturales, para UNAMUNO simbolizaría la tradición "nacional, popular y laica", de la que no se podía prescindir, definiendo la medida como una actuación "confesional", aunque "de confesión anti-católica" y "anti-cristiana" porque, diría, "lo de la neutralidad es una engañería", de ahí que estimara que la circular atentaba contra el sentimiento popular y la calificase de "disparata-

(17) 25 de enero de 1932, - "Resucitado en la escuela, - Circular", - BOE de Oviedo, año 68, 1 de febrero de 1932, núm. 3, págs. 39-42. (Ver el apéndice núm. 15).

da" y de inspiración no solo "anti-nacional, anti-popular y anti-histórica, sino también antipedagógica... que ofende al sentimiento popular hasta de los que carecen de sentimientos confesionales" y, así, como colisión de su pensamiento acabaría señalando que no era posible "en buena pedagogía" que los maestros "laicos de veras" educaran prescindiendo de la tradición nacional simbolizada en el crucifijo y dejando al clero el cuidado de instruir a los fieles en su doctrina.¹⁰⁶

Con apoyo en las iras del comentario de UNAMUNO, al que indirectamente citaba ("alguien que no debe ser sospechoso para el Gobierno y que es un prestigio de la ciencia española"), escribiría también una energética protesta el futuro primado de Toledo, Dr. D. Isidro GOMÁ Y ROMAS, a la sazón obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela, aunque obviando, lógicamente, la simbología de carácter laico que el insigne catedrático había atribuido a la presencia del crucifijo. En su protesta, que hacía extensa al decreto de disolución de la Compañía de Jesús, revelaba el Dr. GOMÁ un conocimiento menos exacto de los hechos que el expresado por el obispo de Oviedo así como una toma de postura crítica de menor altura que la adoptada por aquel. Comenzaría el obispo de Tarazona calificando de "decreto" la circular de la Dirección General de Enseñanza primaria, no criticando su forma de producción y quejándose únicamente del atentado que la desaparición del crucifijo de las aulas suponía contra los sentimientos religiosos del pueblo así como de que, junto a esta medida, se había suprimido también, oficialmente, la enseñanza de la doctrina religiosa, lo cual era una "verdadera ofensiva contra Dios en el alma del niño" por cuanto faltando aquel en el hombre "es este presa casi segura de toda pasión y de todo vicio".

(106) "El Sol", 29 de enero de 1932.

La postura del Dr. GOMÁ sería, por otra parte, menos conciliadora que la del Dr. LUIS Y PÉREZ por cuanto a su crítica añadiría, lo que no había hecho aquel, la desconfianza y, así, diría, refiriéndose a la "energica protesta" que elevaba:

"Acto inútil, si se quiere, el de protestar, cuando abajo se pierde la voz en el ambiente enrarecido de la indiferencia y cuando arriba es la predeterminación irreformable, hija del prejuicio sectario, la que formula las leyes e implacablemente las traduce en hechos."

A pesar de lo cual hablaría porque "creemos los hechos gravísimos y el momento solemne para los intereses católicos de España". Pero su confianza no radicaría tanto en los hombres como en Dios y, así, pondría en Él su esperanza elevando una oración de desagravio y de adhesión al papa y exhortando a los fieles a la fe en un futuro en que se modificarían y juzgarían todos estos ultrajes.¹⁰⁹

También el obispo de Barcelona, en su pastoral de Cuaremas, trataría de la nueva disposición, aunque su alusión no sería tan directa como la de los prelados de Oviedo y Tarazona yendo en el contexto general de la crítica que haría a la laicización de la enseñanza oficial y del tema central de su pastoral: la exaltación de la cruz. Refiriéndose a esta última cuestión señalaría el Dr. IRURIA que su presencia en las escuelas contribuiría al mutuo respeto cristiano entre discípulos y maestros, redundando en

(109) 29 de enero de 1932, "Dos decretos sectarios, Protesta y adhesión", - BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de enero de 1932, núm. 700, págs. 77-83. Queremos llamar aquí a la atención sobre la coincidencia de fechas que se da nuevamente entre la firma del escrito del Dr. GOMÁ y la publicación en "El Sol" del artículo de UNRMUND.

bien de la familia y de la sociedad, se era que, siendo esto así, según su consideración, se preguntara por la razón de la supresión del crucifijo en las escuelas y del "odio a la Santa Cruz, erizado en sistema político". Para el prelado la única explicación radicaba en el odio directo a Cristo, a quien se quería desterrar de la sociedad atacándole en lo más esencial para él: la escuela, razón por la que el laicismo determinaba que la educación había de ser laica y arrebatada a los institutos religiosos el derecho de la enseñanza:

"Y ¿que dice el laicismo para justificar sus medidas sectarias? Dice que hay que respetar la conciencia del niño... ¡Impiétistas! No respetais la conciencia del niño cuando le negais las golosinas que le pueden perjudicar, cuando arrebatáis de sus manos el arma, con que se convierte porque le puede causar la muerte, cuando contrariáis sus caprichos y veleidades... Y hacéis muy bien, porque nunca se respeta tanto la conciencia del niño como cuando se le fuerza y se le dirige rectamente. Y los atrevéis a invocar el respeto a la conciencia, para privarle de su libro... forma de la conciencia y su paz y tranquilidad."

Esa política, en argumento que ya hemos visto reiterado por la jerarquía, solo podía acarrear, según el obispo, el mal del individuo, incapaz de reprimir sus pasiones, ni de adquirir serios criterios sobre el respeto debido a los demás y a sí mismo, incapaz, en suma, de distinguir entre el bien y el mal, lo que redundaría, a su vez, en perjuicio de toda la sociedad.

"Y en nombre del respeto a la conciencia, ¿quereis hacer de los niños cristianos unos apóstatas, para que, después de renegar de Jesús, renieguen también de sus padres, y salgan de las escuelas sin haber aprendido a respetar a nadie, ni a sus padres, ni a la autoridad pública, ni a sí mismos, por culpa de vuestro insensato respeto a su conciencia. Y así saldrán de las escuelas laicos los pobres niños: sin luz que guíe sus pasos, sin freno que contenga sus pasiones, sin semilla de virtudes... Saldrán del puerto de la vida al alto

mar, lanzados en medio de tempestades y escollos, sin carta marítima ni brújulas de gobierno... Su naufragio será inevitable. Pero advertid, gobernantes, que el naufragio de la niñez y juventud es el naufragio de toda la sociedad."

Ante tal peligro los fieles habían de actuar, pues "todos tenemos el deber gravísimo de prevenir y evitar esa horrenda desastrosa" y lo habían de hacer tal como ya lo efectuaban muchos, "... apóstoles seculares, que desde el periódico y la tribuna batallan con denuedo por la defensa de los derechos de la Iglesia, conculcados por ciertos acuerdos de la nueva Constitución y otras disposiciones oficiales". Era preciso, pues, que todos los católicos se unieran a esta tarea "dispuestos a emplear enérgicamente los medios vitales, sin descansar, hasta conseguir la victoria completa".

Tras esta petición describiría el obispo las prácticas más adecuadas de devoción a la cruz y, después de ello, situándose idealmente ante aquella, pasaría a reprobar, con una terminología extremadamente severa, todas las realidades y actuaciones contrarias al espíritu de la Iglesia, en un epígrafe de la pastoral que titularía "Protestación" y que incluiría "en descargo de nuestra conciencia y con el único deseo de salvar nuestra grey".

Entre tales realidades volvería a referirse el prelado a "los errores modernos y el laicismo en la enseñanza" por el cual muchos niños se perderían "y serán desgraciados en el tiempo y en la eternidad", y ello a causa -diría, jurgando dura y poco rigurosamente a los defensores del laicismo- de "esos lobos rapaces que hacen riza en el tierno rebaño con sus blasfemias y prociadades", "lobos" contra los que levantaría su baculo pastoral augurandoles un "horrible castigo" por el escándalo que introducían: los padres de familia tenían que salvar a sus hijos de estos

ataques, y lo habian de hacer segun la suplica que les dirigia: "No los lleveis a las escuelas sin Dios; y, cueste lo que costare, procurad que aprendan bien el catecismo, siendo vosotros sus primeros maestros".⁽¹¹⁰⁾

El obispo de Huesca, por ultimo, aprovecharia igualmente la pastoral de Cuaresma para aludir, si bien sucintamente, al tema de la ensenanza, exhortando al clero a la predicacion de la doctrina de la Iglesia en unos tiempos en que se queria apartar a Cristo de la vista de los hombres "comenzando por la niñez, a quien se quiere educar en el cívico y menosprecio de Crucificado".⁽¹¹¹⁾

(110) 30 de enero de 1932, "Carta pastoral de cuaresma que el Excmo. Sr. Obispo de Barcelona dirige a sus diocesanos.- Ante la cruz de Cristo, redentor del mundo". BDE de Barcelona, año 75, 3 de febrero de 1932, núm. 2, págs. 24-45.

(111) s.f., "Exhortación Pastoral", BDE de Huesca, año 81, 1 de febrero de 1932, núm. 2, págs. 30-31.

12. La organización eclesial de la enseñanza religiosa: reflexiones sobre la situación de la enseñanza e instrucciones y exhortaciones a sacerdotes y fieles, febrero-diciembre de 1932: obispados de Salamanca, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Ávila, Vitoria, Vich, Granada, Santiago, Pamplona, Palencia, León, Oribuela, Madrid-Alcalá, Burgos, Gerona, Barcelona y Málaga. Las pastorales de los obispos de Calahorra, Tarazona, Vitoria y Oribuela.- La reforma del elenco de pecados reservados en la provincia compostelana.

Tras las primeras reacciones de protesta, fue actuación general del episcopado pasar a dictar las normas oportunas sobre organización de la enseñanza del catecismo a nivel parroquial, con el fin de paliar los efectos de la nueva disposición y siguiendo los acuerdos adoptados por la conferencia de metropolitanos, tanto sobre catequesis domini^{ca}l como sobre creación de escuelas católicas. Si bien el diseño que efectuaron en este último punto, debido quizá a la terminología utilizada por los metropolitanos que, como hemos visto, aludían a "escuelas parroquiales... sostenidas por los vecinos del pueblo", era altamente dispar, llamando unos "escuelas parroquiales" a lo que no era más que enseñanza del catecismo, dando otros la misma denominación a lo que eran verdaderas escuelas primarias católicas y creando, en fin, otros un híbrido, difícilmente justificable, entre unas y otras.

(12) Según se deduce de los propios escritos de la jerarquía, la práctica anterior se refiere a la catequesis domini^{ca}l.

Así hizo ya el 2 de febrero el obispo de Salamanca, Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE quien, en una circular dirigida a los parrocos y economos de la diócesis, estableció -después de referirse equivocadamente primero a la prohibición de la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas públicas, sin más especificación y, seguidamente, a "una reciente disposición (que) manda inclusive..." que sea retirado el crucifijo de sus aulas, como si de dos normas aisladas se tratara-⁽¹¹³⁾ una serie de disposiciones organizando la catequesis en la diócesis, porque era necesario, decía entre otras consideraciones de índole religiosa, atender a la evolución de la patria "cuya disolución vamos clarísima para dentro de muy poco, para tan pronto crezca la primera generación sin catecismo" y por que muchos fieles, entre ellos "maestros y maestras que ven truncarse la altura de su ministerio en la desintegración de la enseñanza, mutilada precisamente por lo que tenía de más excelso y fecundo-" le habían solicitado, precisamente, las instrucciones que iba a dictar. Por estos motivos establecería en toda la diócesis las escuelas parroquiales donde los

(113) "Prohibida la enseñanza de la Doctrina Cristiana en las escuelas públicas de Instrucción Primaria, de las cuales una reciente disposición manda inclusive que sea retirada la adorable imagen de Jesús Crucificado, Redentor del mundo, urgentes de manera angustiosa y con apremio incomparable el cumplimiento abnegado, heroico, si es preciso!, de nuestro ministerio catequístico."

Es difícil precisar si el obispo creía erróneamente que la prohibición derivaba directamente de la regulación constitucional, ignorando la ratificación por las Cortes de las disposiciones del mes de mayo, o si, desconociendo la génesis exacta de los hechos y teniendo únicamente claridad sobre la prohibición de la enseñanza del catecismo, sin saber desde cuando ni por qué, y sobre la prohibición reciente de la presencia del crucifijo en las aulas, no quería detenerse en más consideraciones. En todo caso su expresión revela que, a diferencia del obispo de Oviedo, su información sobre la actuación de las Cortes o del gobierno era insuficiente.

nikas, tras su asistencia a la escuela pública, batrían de cursar "guardando "siempre que fuera posible la conveniente separación de sexos": una hora diaria de catecismo a cargo del párroco, economo o feligreses que estos designaran, recibiendo los fieles de la parroquia aportar la oportuna cooperación económica para sufragar los gastos que esta enseñanza pudiera originar."¹¹⁴

En forma similar, aunque con las correspondientes variaciones, irían los distintos prelados dictando las oportunas normas de organización del catecismo en su diócesis; así, pararía el arzobispo de Valencia que, analizando las comunicaciones recibidas sobre el estado de la "Consegregación de la Doctrina Cristiana" en las parroquias, según había solicitado en la Circular núm. 106, de 15 de noviembre de 1901, antes citada, describiría la situación de la mayoría de ellas y de las catequesis establecidas, expresando su confianza en que "el sagrado magisterio del Clero y el apostolado de los reglares sacerdotes conseguirán salvar a los pueblos del naufragio en que se están ahogando por el desordenamiento de errores y sistemas...";¹¹⁵ el arzobispo de Zaragoza, que indicaría a los párrocos que "soliciten... el apoyo privado de los Sres. Maestros, con el fin de obtener la mayor asistencia posible de niños" a la "catequesis";¹¹⁶ el arzobispo de Sevilla, que, mediante un "Decreto arzobispal", reorganizaría la "Junta Diocesana para la Enseñanza del Catecismo", a fin de fomentar su difusión.

(114) 2 de febrero de 1902, "Circular del Prelado sobre la creación de Escuelas Parroquiales de Doctrina Cristiana", BOE de Salamanca, año 79, 3 de febrero de 1902, núm. 2, págs. 42-45.

(115) 2 de febrero de 1902, "Circular núm. 112, Insistiendo acerca de la instrucción catequística", BOE de Valencia, 15 de febrero de 1902, núm. 241, págs. 60-65.

(116) 4 de febrero de 1902, "Circular núm. 5 sobre la enseñanza del Catecismo", BOE de Zaragoza, año 71, 5 de febrero de 1902, núm. 4, págs. 70-71.

"en la ciudad de Sevilla y en toda la diócesis en general", asignándole a tales efectos una serie de funciones delegadas sobre organización de las catequesis, inspección, etc. etc.;⁽¹¹⁷⁾ el obispo de Avila, quien, en línea con las cartas escritas al cardenal VIDAL, haría en su "Decreto sobre la catequesis de niños en las parroquias" una pormenorizada y exacta descripción de lo establecido en la Constitución, el significado de la ratificación por las Cortes del decreto de 6 de mayo y la nueva regulación, tanto respecto a la enseñanza del catecismo como sobre la presencia del crucifijo en las escuelas, introducida por la circular de 12 de enero, si bien no descendería, como el Dr. LUIS Y PAREZ, al análisis de la irregularidad jurídica de esta norma. Para FRA Y LAGIEL las disposiciones de la citada circular supondrían, entre las "muchas y graves heridas" sufridas por la religión católica, "la mas grave de todas y la que acarreará más funestos resultados si no se rectifica".⁽¹¹⁸⁾ y para paliar en parte sus efectos, pasaría a dictar las correspondientes instrucciones sobre el establecimiento de las catequesis parroquiales y las "Corradías de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias, señalando a los párrocos la necesidad de llevar el censo de los niños y la vigilancia de su asistencia a la catequesis, sobre la que habían de insistir especialmente cerca de los padres y las madres; por último les instaría a que "si bien ya no pesaba sobre ellos esta obligación respecto a las escuelas nacionales- continuasen realizando la visita semanal a aquellas escuelas de carácter particular católicas, fueran de religiosos o de seglares."⁽¹¹⁹⁾

(117) 6 de febrero de 1932, "Decreto arzobispal", BGE de Sevilla, año 75, 22 de febrero de 1932, núm. 1200, págs. 81-89.

(118) 8 de febrero de 1932, "Decreto sobre la catequesis de niños en las parroquias", BGE de Avila, 9 de febrero de 1932, núm. 2, págs. 65-69.

También el Dr. MUGICA, dictaría desde el exilio instrucciones especiales para la diócesis de Vitoria, aconsejando a los párrocos que procurasen impartir el catecismo, por sí o por medio de la "Congregación de la Doctrina Cristiana", todos los días o, al menos, en días alternos, advirtiéndoles a los padres sobre sus obligaciones en orden a procurar a los niños esta instrucción. "Igual haría el obispo de Vich, citando textualmente los párrafos de la circular de la de enero relativos a la supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas estatales y aclarando que el catecismo que ahora establecía era "el supletorio del suprimido en la escuela laica", razón por la que debía continuar el catecismo parroquial de domingos y días festivos; los párrocos deberían enviarle con carácter inmediato las resoluciones que adoptaran para el cumplimiento de sus mandatos, con indicación de centros catequísticos y personas

- (19) 8 de febrero de 1932. "Circular núm. 124. Sobre la enseñanza religiosa de los niños", BGE de Vitoria, año 68, 15 de febrero de 1932, núm. 5, págs. 164-165. Quince días más tarde dictaría el Dr. MUGICA una nueva circular reproduciendo lo escrito por uno de sus predecesores, el Dr. D. Fructosio MELLO, en 1915, sobre el texto único obligatorio para la enseñanza del catecismo en la diócesis, señalando que el también anterior obispo Dr. EIJU y SARAY aprobó, a estos efectos, el "Catecismo diocesano" también publicado en vascuence. Ahora él, dada la necesidad de intensificar la enseñanza del catecismo "que Nos imponen las presentes circunstancias", ordenaba que el referido catecismo se adoptara en todos los lugares en que se impartiera la doctrina cristiana. (23 de febrero de 1932. "Circular núm. 125.- El Catecismo Diocesano texto único obligatorio", BGE de Vitoria, año 68, 15 de marzo de 1932, núm. 7, págs. 189-192). El mismo boletín comunicaría ignoramos la razón de que se pospusiera hasta estas fechas, que en 20 de septiembre de 1931 había sido aprobada por el obispo la "Agrupación Sacerdotal Catequística de Estudio y Acción", asociación para el análisis de los problemas de la formación religiosa y su fomento, en la que podían inscribirse cuantos sacerdotes lo desearan, etc. "¿Que es la A.S.C.E.A.?, Ibid., pag. 192). El año siguiente, con fecha 22 de abril dictaría nuevamente el Dr. MUGICA una circular complementaria de la de 23 de febrero de 1932, aclarando en ella la cuestión del idioma en que había de impartirse el catecismo y en la que señalaba que "aunque Nos sentimos entranablemente afor a la milenaria lengua del heroso país que Nos vio nacer y deseamos vivamente su conservación y arraigo, no podemos disponer en este punto nada que contrarie a la legítima voluntad de los padres, a quienes creemos libres en absoluto para elegir por sí mismos el idioma en el cual se ha de enseñar a sus hijos la Doctrina Cristiana", por ello la catequesis había de impartirse en el idioma que desearan los padres, de acuerdo con su solicitud. (22 de abril de 1933. "Sobre el idioma en que se ha de enseñar a los niños la Doctrina Cristiana", BGE de Vitoria, año 69, 1 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 242-243).

que de ellas se encargarán..."

El vicario capitular de Granada, Dr. Lino RODRIGO RUESCA, se limitaría a resaltar esquéticamente la urgencia de la enseñanza religiosa, para la cual los párrocos habían de seguir las instrucciones publicadas en el boletín de 15 de marzo de 1910 sobre el "Reglamento de la Doctrina Cristiana".⁽¹²⁰⁾

Inicio el arzobispo de Santiago el dictado de las normas de organización en su diócesis refiriéndose a "las disposiciones de la Dirección General de Primera Enseñanza" que prohibían la instrucción confesional en las escuelas nacionales y ordenaban retirar de ellas el crucifijo como "una de las fases de la violenta ofensiva que se ha emprendido en estos últimos tiempos contra la Iglesia católica, bajo la capa de la neutralidad religiosa que debe profesar el Estado", derivando de este hecho la necesidad de dedicarse activamente a la enseñanza de la doctrina toda vez que, diría, variando el conocido argumento de los males que acarrearían a una sociedad en que dicha enseñanza no exis-

(120) 15 de febrero de 1932, "Circular núm. 5.- Sobre Catecismo", BOE de Vich, año 78, 15 de febrero de 1932, núm. 2091, págs. 29-30.

(121) 12 de febrero de 1932, "Circular sobre la enseñanza del Catecismo", BOE de Granada, año 87, 15 de febrero de 1932, núm. 3496, pag. 37. Hasta el mes de octubre no dictaría el Dr. RODRIGO RUESCA instrucciones concretas sobre organización de la catequesis en la archidiócesis, citándose estas a la creación -siguiendo los pasos dados por el cardenal ILUNDÁIN que había reorganizado el órgano similar existente en Sevilla- de una "Comisión Diocesana de Instrucción Religiosa" a quien encargó dicha organización (7 de octubre de 1932, "Comisión Diocesana de Instrucción Religiosa", BOE de Granada, año 87, 15 de octubre de 1932, núm. 351, págs. 306-308); seguidamente fue la propia Comisión la que pasó a dictar las oportunas normas (duración de las catequesis, lecciones a impartir a la semana, estudios a realizar, etc.) (27 de octubre de 1932, "Comisión Diocesana de Instrucción Religiosa: A los Seres. Directores Directores de Catequesis de niños", BOE de Granada, año 87, 31 de octubre de 1932, núm. 3512, págs. 294-295), publicando, incluso, un "modelo" que aconsejaba seguir en el desarrollo de las clases de catecismo. (s.f., "Comisión Diocesana de Instrucción Religiosa", BOE de Granada, año 87, 15 de noviembre de 1932, núm. 3513, págs. 306-308).

tierra y contemplando tan solo sus relaciones con la Iglesia, "mal podremos conseguir el día de mañana que la sociedad respete los derechos de Dios y de su Iglesia si hoy los niños se forman a espaldas del catecismo"; la formación en este fin, no obstante, necesaria no solo en el orden aludido ya que, como ya hemos visto argumentado aunque el Sr. MARÍNES NÚÑEZ lo señalara sucintamente, afectaba a todos los niveles, pues únicamente a través del catecismo podía instruirse a los niños en sus deberes "para con Dios, para consigo mismos, para con sus prójimos y para la sociedad" y, por ello, "¿quien podrá predecir los males que originaría a nuestra patria una generación sin catecismo?". Mas los argumentos del arzobispo se apoyaban tanto en razones de índole temporal como espiritual y, así, aludía a "este gobierno mal que amenaza el espíritu cristiano de nuestra patria" y frente al que los sacerdotes habían de luchar para evitar el fin de una tradición religiosa de quince siglos y la pérdida para la Iglesia de "una de sus hijas más queridas".

Por todas estas razones y en función de la cuenta que Dios les pediría, los sacerdotes habían de intensificar la enseñanza del catecismo; conocía, sin embargo, la dificultad de implantar la catequesis diaria dada la distribución de las aldeas de la diócesis, razón por la que se limitaría a indicar que los parrocos habían de aprovechar "todas las ocasiones favorables". Junto a este encargo les haría el de trabajar "cerca de los maestros nacionales para que os ayuden en cuanto les sea posible a la instrucción religiosa" encargo que, por la ambigua formulación que encierra en contraste con el realizado por el arzobispo de Zaragoza, podía dar lugar a diversas interpretaciones contrarias, incluso, a la disposición del gobierno.¹¹²²

(122) El planteamiento del Sr. Rigoberto DOMENECH VALLS no dejaba de ser inteligente por cuanto, por una parte, quería recurrir a la autoridad moral de los maestros y, por otra, al hacer referencia al carácter privado de su intervención, no les instaba a consultar la Circular de la Dirección General de Primera Enseñanza.

No obstante, creemos que el conocimiento de esta disposición hacia que la recomendación del arzobispo de Santiago, aparte de tener una ponderación, dadas las fechas en que la efectuaba, de la que habían carecido las palabras de su sufragáneo de Iquique, haya de entenderse, a pesar de su indeterminación, más en la línea indicada por el Dr. DOMÍNGUEZ que en la de recomendar actuaciones en pro de la colaboración pública del magisterio, y ello por dos razones, una, aunque discutible, porque el arzobispo aludía a la ayuda "a la instrucción" y no "en la instrucción" y otra porque indicaría a los sacerdotes lo siguiente: "tener por seguro que seréis los únicos que direzcan instrucción religiosa en los pueblos", frase que parece eliminar cualquier esperanza de colaboración opuesta a la nueva norma. Es, sin embargo, indudable que, fuera de ello consciente el arzobispo o no, el encargo que efectuaba podía dar lugar, por la generalidad de su formulación, a que los parrocos instaran de los maestros la conculcación de la circular de 12 de enero, bien solicitando su cooperación en la enseñanza religiosa, bien pidiendo que, desde la escuela, aconsejaran la asistencia a la catequesis.

Tras esta recomendación hacia a los parrocos la conocida advertencia sobre el establecimiento de la "Cofradía de la Doctrina Cristiana" y, a continuación -quiza por las características geográficas de la diócesis a que antes había aludido- introduciría la novedad de exhortar a los sacerdotes para que procurasen impartir, junto a la enseñanza religiosa, algunas clases de instrucción primaria, a fin de atraer a niños y adultos, lo cual era obviamente distinto al diseño de verdaderas "escuelas parroquiales" que veremos realizarían otros obispos y, más adelante, el propio Dr. MARTÍNEZ, y que, además, venía posibilitado, en lo que a pequeños núcleos de población se refiere, por el decreto de

El 11 de mayo de 1931;⁽¹²³⁾ esta idea la reforzaría aludiendo a unos hechos que no hemos visto reflejados en ningún otro boletín eclesástico consultado: "Sabemos que en muchas diócesis han sido muy numerosos los padres de familia que se han presentado a sus Obispos y sacerdotes para que se encarguen en adelante de la educación de sus hijos, ya que no quieren mandarlos a las escuelas donde se prescinda de la instrucción religiosa"; el proceder a asumir esta educación recibiría, según el Dr. MARTÍNEZ NUÑEZ, el problema de la enseñanza del catecismo, al facilitar la labor del sacerdote.

Junto a esta novedosa idea introduciría el arzobispo de Santiago la de que los sacerdotes, aunque no pudieran realizar en adelante la visita a las escuelas no habían de desentenderse de lo que sucediera en ellas, "pues -diría, en contraste con la posible colaboración de los maestros a que antes había aludido- es seguro que en muchas de ellas la neutralidad religiosa ha de convertirse en persecución a todo cuanto signifique espíritu o sentimientos católicos", en cuyo caso habrían de elevar la oportuna protesta "ante quien corresponda" y advertir a los padres de familia.

Para acabar repetiría el arzobispo las palabras del obispo de Avila sobre el censo de los niños que habían de asistir a la catequesis y la exhortación a los padres y a las madres sobre tal asistencia, aludiendo, por fin, a la fe que habían de tener los sacerdotes en su actuación pese a las tribulaciones del momento, dado el triunfo secular de la Iglesia.⁽¹²⁴⁾

(123) Ver la nota 161.

(124) 15 de febrero de 1932, "Circular sobre la intensificación de la Catequesis", BOE de Santiago, año 71, 19 de febrero de 1932, núm. 2669, págs. 33-36. Distintos boletines eclesásticos darían, en 1932 y 1933 publicidad a lo que se consideraban profecías de la madre María Rafaela: en este caso sería el de la archidiócesis de Santiago el que en el mes de abril aludiría a lo que se atribuía a la visión profética de dicha religiosa en relación con las medidas estatales en materia de enseñanza de la religión.

No publicaría el obispo de Pamplona instrucción alguna a sus sacerdotes por aquellas fechas sobre el tema que nos ocupa, limitándose el boletín eclesialístico de la diócesis a insertar unas orientaciones, en forma de preguntas y respuestas, dirigidas a los padres de familia por las que se les expresaba la prohibición de enviar a sus hijos a escuelas en que se dieran enseñanzas contrarias a la fe o moral católica, debiendo asistir siempre a escuelas catolicas; sólo en el caso de que estas no existieran en la localidad podían enviarlos a escuelas que fueran realmente católicas, mas con la obligación de vigilar la enseñanza

"El Corazón de Jesús y la santísima Virgen se hicieron ver y sentir... que hasta en su querida España se reteraría, y con más furia que en otras naciones, el espíritu del mal, trabajando sin descanso por borrar la fe cristiana en todos sus habitantes, y de manera especial querían con gran empeño quitar, y quitaran, de la vista a sus hijos... su imagen, prohibirán que se les enseñe su Doctrina divina...".

Fras esta descripción, en la que también se aludía a la profanación y destrucción de templos e imágenes y al propósito de borrar todo vestigio de religión, venía a vaticinarse que nunca se conseguiría quitar la fe de España, antes al contrario.

El comentarista del boletín señalaba, como colofón, que muchas de las profecías de la religiosa ya se habían cumplido, por lo que había que esperar igualmente el cumplimiento de esta "nueva realización, en su primera parte, está dolorosamente a nuestra vista", por tanto y esta era la razón de que se efectuara esta publicación: la confianza en ello debería ser estímulo "para trabajar denodada e infatigablemente por un triunfo... que es seguro y que llevará consigo la salvación de España...". (s.r. BOE de Santiago, año 71, 30 de abril de 1932, num. 2673, págs. 149-151). Otros boletines que también publicarían comentarios de tal índole serían los de Málaga (año 65, 15 de junio de 1932, num. 6, págs. 146-147); Coria (en esta ocasión con glosa del propio obispo) año 67, 15 de septiembre de 1932, num. 42, págs. 543-547) y Orense (más centrado en el tema de la inmodestia en las mujeres) año 100, 4 de septiembre de 1933, num. 38, págs. 281-284).

Sobre la causa de beatificación de la M. Matols (cuyo acuerdo por el Vaticano publicaron todos los Boletines eclesialísticos en 1931), la difusión de sus escritos y el curioso caso de las apariciones de Ezquiroga (a las que el obispo prohibió expresamente asistir a sus sacerdotes el 27 de diciembre de 1931 y a todos sus feligreses en 7 de septiembre de 1933, juzgando severamente cuanto allí ocurría), al ser temas que exceden de estas tesis, nos remitimos a la única obra en que los hemos visto tratados: GARRIGA, Ramón: *El cardenal Segura y el nacional-catolicismo*, Barcelona, 1977, págs. 192-196.

que recibían y de procurarles la adecuada instrucción religiosa, tanto por sí mismos como a través de las instancias creadas por la Iglesia.¹¹²⁵

Ya hemos destacado la preocupación del Dr. PARRADO por la cuestión de la enseñanza, es así obvio que, ante la nueva situación, se refiriera otra vez a ella y lo hiciera de modo especial, se trata, en efecto, de uno de los prelados que en 1922 trató el tema en una pastoral, aunque en ella no se refiriera con carácter exclusivo a la enseñanza y abordara conjuntamente su problemática con la planteada por el presupuesto del culto y clero.

Dirigiéndose a los sacerdotes de su diócesis comenzaría paratraseando al obispo de Oviedo (lo cual nos revela que los documentos de la jerarquía eran fuente, sino desde luego y como vemos viendo, de uniformidad, si de mutua inspiración): "el nuevo orden de cosas... traenos cada día un nuevo arán y parece que añade malicia sobre malicia para hacer mas difícil el ejercicio de nuestra misión sacerdotal". La pastoral, por otra parte, contenía descripciones que también hemos visto ya expresadas por otros obispos v. así, tras señalar que el tema era de extremada urgencia e importancia "pues diríase que entre las autoridades superiores y subalternas del Estado en esta materia, y también entre los funcionarios del ramo de instrucción pública,¹¹²⁶ se ha establecido un verdadero pugilato por conquistar el título de campeón laiciata", se referiría, siguiendo las palabras de PLA Y BENIEL, al sigui-

(125) s. l. "Cárces de conciencia sobre la asistencia de los niños a las escuelas", BOE de Pamplona, año 71, 15 de febrero de 1922, núm. 1727, págs. 59-60.

(126) Como más adelante se ve se refería a la inspección provincial que, obviamente, tenía que trasladar a los maestros, y cumplir las directrices de la circular de 12 de enero.

titado de la ratificación por las Cortes del decreto de seis de mayo, indicando que, pese a ello y al anuncio de la nueva ley sobre instrucción pública, "autoridades, no supremas, sino subordinadas, cuales son la Dirección General de Primera Enseñanza y la Inspección en nuestra provincia... anticipándose y prejulgando lo que han de hacer las Cortes y el Gobierno, han venido a rectificar y contradecir las disposiciones soberanas de las Cortes y las circulares que para la ejecución del decreto de 6 de mayo ellas mismas habían dictado"¹²⁷ prohibiendo en respectivas Circulares... la enseñanza religiosa y mandando retirar los símbolos católicos en las escuelas nacionales", e, inspirándose nuevamente en las expresiones del Dr. LUIS Y FARRÉ, indicaría que "No queremos entrar en la intención de estas autoridades subalternas, que han sentido este exceso de 'celo' por la enseñanza y estos escrúpulos constitucionalistas", señalando que tal actuación iba en contra del respeto y la libertad de las conciencias y añadiendo, en una dura acusación, que "habra que convenir en que libertad de conciencia y coacción, según el laicismo y la naturalidad del nuevo Estado, son una sola y misma cosa en tratándose de perseguir y vejear a los católicos".

Efectuadas sus críticas pasaría a poner de manifiesto el problema que estas disposiciones habían creado, el deber que pesaba sobre los sacerdotes y la necesidad de actuar en orden a la enseñanza religiosa. A tal fin dictaría las oportunas normas sobre instrucción catequística y establecimiento de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en las parroquias.

(127) Se refería el obispo, aunque muy confusamente expresado, a la circular de 13 de mayo ratificada por las Cortes.

Finalizaría el Dr. FARRADO sus palabras con una recomendación de formulación ciertamente novedosa, toda vez que apoyándose precisamente en el contenido de la circular de la Dirección General de Primera Enseñanza, en cuanto prohibía "toda propaganda política, social, filosófica y religiosa", diría a los padres que vigilasen que en la escuela no se enseñara algo contrario a la conciencia católica de sus hijos y que, si esto ocurría, los párrocos deberían darle cuenta "para que Nos podamos también reclamar ante las autoridades superiores, o tomar aquellas medidas en Nuestra mano estén para defender la inocencia de los niños y los derechos de los padres", actuación que, aunque con variaciones respecto a los protagonistas de la vigilancia y los autores de la reclamación, ya hemos visto apuntada por el arzobispo de Santiago.¹²⁸

El Dr. José ALVAREZ MIRANDA, obispo de León, dictaría el 21 de febrero una circular que iniciaba lacónicamente aludiendo a las exhortaciones que hiciera cuando la enseñanza del catecismo estaba permitida en las escuelas nacionales al objeto de que esta no se omitiera y señalando la necesidad de suplir ahora su falta al haber quedado prohibida.

Lo escueto del párrafo con que el Dr. ALVAREZ iniciaba su escrito no era óbice para que, a renglón seguido, renovara su protesta contra la enseñanza laica "y especialmente contra la retirada del Santo Crucifijo y de la imagen de la Santísima Virgen de la escuela", lo que había

(128) 15 de febrero de 1932, "Instrucción pastoral", EOE de Palencia, año 82, 20 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 88-104.

producido en muchos lugares la protesta de los alumnos y de sus padres.¹¹²⁹ Pedía el obispo que unos y otros rezaran ante estos hechos, pues Cristo atendería sus suplicas y "desbaratará y destruirá todos los funestos y odiosos planes de la impiedad, de la masonería y del sectarismo".

Mientras tanto había de atenderse la instrucción religiosa de los niños que, como ya señalara en la pastoral del 13 de junio anterior, era tanto un derecho como un deber que incumbía en primer lugar a sus padres, los cuales debían procurarles escuela católica y enseñanza religiosa. Mas esta obligación también atañía a los sacerdotes, a los que urgía "de un modo especial, cuando la escuela nacional es desgraciadamente laica", de ahí que, con independencia de la catequesis parroquial y a fin de paliar la nueva situación, deberían instaurar "esote todo en los lugares donde no existiera escuela católica "o colegio en que se enseñe el Catecismo"- catequesis en tres días laborales, estando obligados los padres a cuidar la asistencia de sus hijos.

Reforzaría el obispo la razón de estas instrucciones y de la importancia de la enseñanza religiosa señalando que "muchos de los males que estamos lamentando, provienen de esto, de la falta de instrucción religiosa", afirmación que hace preguntarse por la propia actuación eclesial en un pasado en el que sí estaba permitida la formación religiosa y recordar lo expuesto por los Dres. CARRERAS y VILAPLANA al Vaticano en el mes de octubre. "Hay mucha ignorancia en materia de religión", constataría el prelado y, como consecuencia de ello, declarar la urgencia de "aplicar sin dilación el oportuno remedio con la catequesis de

¹¹²⁹ En el artículo antes citado se refería UNAMUNO al motín organizado por las madres de "una famosa villa" de Salamanca.

niños y adultos", urgencia que, como se ve, aunque venía a actualizarse por la nueva disposición gubernamental, traía su causa para el obispo de situaciones anteriores; probablemente no se percataba el Sr. ALVAREZ MIRANDA de las implicaciones de este planteamiento, que no había incluido en su pastoral del mes de junio y que ningún otro prelado había hecho hasta el momento, pero, consciente o inconscientemente aludía ahora, junto a la persecución político-social del presente, a los propios fallos eclesiásticos del pasado.¹¹³⁰

Una vez reorganizada la Junta diocesana para la enseñanza del catecismo, pasaría el Cardenal ILUNIAIN a orientar la actuación de sus sacerdotes y, así, con independencia de una carta no publicada en el boletín que, según pensaba, les había enviado haciéndoles, "entre otros encargos", el de la dedicación a la catequesis, les dirigiera el 1 de marzo un escrito especial sobre este tema. Indicaría en él, tras decir sucintamente que "el Estado ha suprimido la enseñanza de la religión en la escuela" que los padres, "sea por falta de tiempo, sea por incompetencia, sea por negligencia" omitían frecuentemente la enseñanza de la religión en el hogar, razón por la que los sacerdotes debían suplir ahora tanto la falta de estos como la de los maestros, a fin de evitar que los niños crecieran ignorando las verdades de la religión y los deberes cristianos, lo que les haría no conocer a Dios ni "la nobleza del alma y de su destino final".

¹¹³⁰ 21 de febrero de 1932. "Circular núm. 299.- La Enseñanza de la Doctrina Cristiana", BOE de León, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 41-45.

Exponerla el Cardenal como en Sevilla los seglares se habían prestado a colaborar en la catequesis, que había quedado ya organizada, siendo ahora de suma urgencia que las clases de catecismo se instauraran en toda la diócesis por ser esta "la obra más trascendental y más urgente", que de ningún modo había de descuidarse so pena de adquirir una grave responsabilidad sobre la incredulidad de las futuras generaciones.

Por ello dictaría una serie de disposiciones en las que destaca el giro que daba a su consideración sobre la actuación de los padres de familia, respecto a los cuales, como hemos visto, la jerarquía venía esperando una actitud positiva de encaminar a sus hijos hacia las catequesis; el Cardenal ILUNDAIN no sólo no aludía a tal dirección sino que indicaba que la asistencia de los niños a la catequesis quedaba condicionada a que sus padres no pusieran impedimentos. De esta forma establecería el Cardenal lo siguiente: institución en todas las parroquias de la "Asociación de la Doctrina Cristiana"; catequesis para niños y niñas todos los domingos, "sin excusa alguna"; clases de doctrina cristiana tres días semanales en todos los pueblos en que fuera posible, "reuniendo a los niños de las escuelas oficiales, cuyos padres no lo impidan... para suplir la enseñanza religiosa que el establecimiento de la escuela laica ha suprimido" y obligación de los sacerdotes de estimular a los fieles para que colaborasen en la enseñanza del catecismo.¹⁴³¹

¹⁴³¹) 1 de marzo de 1932, "A nuestros venerables Párrocos y Encargados de la cura de almas", ECE de Sevilla, año 5. 7 de marzo de 1932, num. 1201, págs. 85-82.

La alusión a la posible actitud negativa de los padres de familia venía sin duda condicionada por la constatación de la pesima situación que vivía el cristianismo en la diócesis. Véase, CUENCA RODRÍGUEZ, José Manuel, *Estudios sobre la Iglesia andaluza moderna y contemporánea*, Córdoba, 1980, págs. 74-75; y ORDÓÑEZ MARQUEZ, Juan, *La apostasía de las masas y la persecución religiosa en la provincia de Huelva, 1931-1936*, Madrid, 1968; en las páginas 220-222 se refiere el autor a la

Este documento sería complementado por otros dos publicados en el número siguiente del boletín y suscritos por la "Junta Diocesana para la Enseñanza del Catecismo" y por el cardenal arzobispo respectivamente.

Aludía el primero a la pasada celebración de la "Semana catequística", del 25 al 31 de enero, promovida por el prelado,⁽¹³²⁾ que había despertado el entusiasmo de sacerdotes y fieles, dando ya sus resultados, así como a la reorganización de la Junta que el cardenal había ampliado "con nuevos y prestigiosos miembros de uno y otro sexo", otorgándoles más atribuciones; tras ello pasaba a dar instrucciones "con el fin de que haya uniformidad en lo posible" sobre el desarrollo de la catequesis dominical y la que había de darse en días laborables, que sería "a la salida de las escuelas oficiales, con preferencia -por no decir exclusivamente- para los alumnos de las mismas" y en algún templo de la parroquia o local anejo, próximo a la escuela. Tanto para una como para otra catequesis se valdrían los parrocos de catequistas auxiliares de ambos sexos "procurando que los seglares varones instruyan solo a los niños" y en aquellos casos en que en el término de una parroquia no hubiera ninguna escuela nacional y en el de otra cercana varias de ellas, los sacerdotes de la primera deberían hacerse cargo de los niños de la escuela más próxima. Tras aludir a la necesidad del establecimiento de la "Asociación de la Doctrina Cristiana" en todas las feligresías pedía a todos los arciprestes el envío, antes

memoria elaborada por el cardenal LUNDQVIST con motivo de la visita a Lima; en ella aludía el prelado a "la pésima conducta de los padres ante las obligaciones ineludibles en la educación cristiana de los propios hijos" y al espíritu laicista de la enseñanza estatal no contrarrestado por el interés de los fieles para que la diócesis aminorara el problema con la creación de escuelas propias, por más que aun en éstas era de temer la intervención sectaria del Estado".

(132) Ver el epígrafe de este capítulo relativo a las reseñas de las realizaciones en 1932.

del 30 de abril, de la oportuna información relativa a la catequesis dominical en todas sus parroquias, las que la tenían en días laborables y en cuales se había fundado la sociedad citada. Finalizaba el escrito exhortando a los sacerdotes a realizar con todo empeño la nueva tarea, pues "la mies es mucha, cada día mas dilatada y mas difícil; los operarios pocos, cada vez menos y en mayor desamparo oficial"; no obstante necesario era confiar en la providencia y trabajar ya que "miles y miles de almas inocentes (solo el censo escolar oficial de la capital asciende a 10.000) quedan privadas casi en absoluto del conocimiento de Dios..."⁽¹³²⁾

El segundo documento era el "Reglamento para la Catequesis en la Diócesis hispalense" y se refería a las actividades que deberían realizar los socios de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" ("asistir y coadyuvar a la enseñanza del catecismo"), y al establecimiento de una "Junta parroquial"; insistía en la forma en que había de desarrollarse la catequesis dominical ("con separación de sexos, aunque sea en el mismo lugar"), la catequesis de los días laborales y la catequesis -denominada "de perseverancia"- para jóvenes de distintas edades y en la que no había que enseñarles únicamente la fe y moral católica sino también proceder a "desvanecer las objeciones que en todas partes, hasta en el seno del hogar doméstico, se oyen y leen a todas horas", lo cual debería hacerse con los debidos "tino y discreción" a fin de no engendrar nuevas dudas; como

(132) s. f., "Junta Diocesana para la Enseñanza del Catecismo" BOE de Sevilla, año 16, 23 de marzo de 1942, núm. 1202, págs. 108-111.

complemento de esta formación se describían las actividades caritativas y piadosas que los jóvenes deberían desarrollar. Señalaba, por último, que en las poblaciones donde hubiera centros de enseñanza "como Universidades, Instituto, Escuelas Superiores, Liceos, Gimnasios, Legaciones cuantas gestiones sean posibles para establecer conferencias de Religión para instruir en las verdades de la fe y en las normas de la vida cristiana a la juventud que frecuenta las aulas públicas", recomendación con la que, sin aludir a él, se comenzaba a querer hacer frente a lo establecido en el recién publicado decreto de 12 de marzo: "Se acababa el reglamento exhortando a la organización de actos piadosos y

(34) En efecto, con la citada fecha se había publicado un escueto decreto, a propuesta del ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, por el que, en parte, venía a confirmarse la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas establecida por la circular de la misma fecha del mes de enero, haciéndola, además, extensiva a todos los centros docentes oficiales. Ahora bien, decíamos sólo "en parte" porque así como la mencionada circular se había referido a toda actividad que pudiera relacionarse con la religión, el decreto aludía, única y exclusivamente, a la religión como asignatura, no quedando prohibidas, en consecuencia, actividades religiosas ajenas al contenido del programa escolar: de esta forma no sólo era plausible sino lógico el consejo dado por el cardenal ILUNDAIN en función de este decreto. El texto de la nueva disposición, publicada en el "Apéndice documental" de los boletines eclesiásticos, número 9 de 1932, era el siguiente:

"Artículo único.- Queda suprimida la asignatura de Religión en todos los Centros docentes dependientes de este Ministerio, cesando en sus funciones el profesorado que venía adscrito a la misma, con los derechos que les corresponda legalmente".

(Gaceta de Madrid de 17 de marzo de 1932, núm. 77, pag. 1923).

Curiosamente esta nueva norma, mencionada sólo en forma implícita por la jerarquía, no dió lugar a las protestas que había provocado la supresión de la enseñanza de religión en las escuelas primarias.

de cultura religiosa para los jóvenes en las tardes de los días festivos.¹⁰³⁵

El Dr. Tomas MÚNIZ PABLOS, obispo de Pamplona, se limitaría, por su parte, a declarar erigida en todas las parroquias de la diócesis la "Corradia o Asociación de la Doctrina Cristiana", "cuya necesidad se siente más ahora desde que por disposiciones del poder civil se ha suprimido la enseñanza del catecismo en las escuelas públicas", fijando su organización y funcionamiento y las finalidades que había de cumplir en orden a la ayuda a prestar a los parrocos en la enseñanza de la religión a niños y adultos, finalidades que señalaba detalladamente (promover la cristiandad a la catequesis, explicar esta, fomentar los "catecismos de perseverancia" y propagar "por todas las vías legítimas la mayor divulgación de la doctrina cristiana y el reparto de folletos, revistas y copias catequísticas"). Recomendaba al obispo a todos los sacerdotes el máximo esfuerzo en la enseñanza del catecismo y, en forma más explícita que la seguida por el obispo de León, reflexionaba sobre la propia actuación sacerdotal en el pasado, indicando que "acaso a nuestra desidia en este punto se deba la trasa ignorancia que de pronto se ha destapado en toda España, y a la cual atribuimos en máxima parte el origen de los males que ahora padecemos", comentario que, al aludir irónicamente al carácter sucio de la ignorancia religiosa podía referirse tanto a la escasez de la formación impartida como

¹⁰³⁵ 21 de marzo de 1932, "Reglamento para la Catequesis en la Diócesis Hispalense", *ibid.*, págs. 112-116.

a la poca profundidad de esta y que, en todo caso, constataba que las enseñanzas de la Iglesia no habían arraigado en la gran masa de fieles, a quienes un cambio de régimen político podía hacer variar unas creencias no del todo compartidas o compartidas solo en apariencia."³⁶

Interesante es la publicación que efectuaría el Boletín eclesiástico de la diócesis de Tarazona y Tudela de la carta que Fernando DE LOS RÍOS remitió a GIL ROBLES en contestación a la que este le dirigiera protestando por la actuación de muchos maestros, que impedían la entrada a los alumnos que ostentaran atributos confesionales; esta carta fue ampliamente reproducida en las restantes diócesis aunque en fechas muy posteriores; sin embargo, los boletines no publicaron la del diputado agrario ni reseñaron cuando envió su carta, tampoco consignaron la fecha de la contestación del ministro de Instrucción Pública:

"...En respuesta a su carta, tengo la satisfacción de comunicarle, por su interés y lo justo de su demanda, que la tomo muy en consideración, habiendo dado ya instrucciones precisas a los maestros para que no confundan el laicismo de las escuelas y de la enseñanza con la ostentación, perfectamente lícita, de los atributos confesionales de los alumnos."³⁷

(36) s.f., "Decreto declarando exigida en todas las Parroquias de la Diócesis la Confraternidad o Asociación de la Doctrina Cristiana", BDE de Pamplona, año 71, 15 de marzo de 1932, núm. 1729, págs. 87-89.

(37) s.f., "Los alumnos podrán ostentar atributos confesionales.- Es perfectamente lícito", BDE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 704, págs. 254-255.

Esta carta fue publicada también entre otros, en los siguientes boletines eclesiásticos y bajo estos títulos:

- "No se puede impedir a los escolares la ostentación de los atributos confesionales", BDE de Granada, año 87, 15 de mayo de 1932, núm. 3501, pág. 114.
- "Ostentación de atributos confesionales", BDE de Vitoria, año 68, 15 de mayo de 1932, núm. 11, págs. 279-280.

Ya el 8 de abril dictaría el Dr. Francisco Javier CASTORIZA LOINAZ, obispo de Orihuela, un decreto por el que, en forma de organización similar a la efectuada en Sevilla, establecía un "Secretariado Diocesano de Instrucción Religiosa", aunque, en este caso, el nuevo órgano quedaba adscrito al Secretariado de Acción Católica y estaba integrado solo por sacerdotes. Las razones que exponía el prelado para la creación de este secretariado y en las que aludía a la prohibición de la enseñanza de la religión en todos los centros estatales, de acuerdo con la nueva disposición gubernativa de 12 de marzo, eran las siguientes:

"... la actual situación de nuestra Patria, en la que ha quedado prosrita de todas las escuelas y centros oficiales la enseñanza de la Religión,

-
- "No se puede impedir a los escolares la ostentación de los atributos confesionales", BOE de Santiago, año 71, 30 de junio de 1932, num. 2677, págs. 230-231.
 - "No se puede impedir a los escolares la ostentación de los atributos confesionales", BOE de Barcelona, año 75, 30 de junio de 1932, num. 12, págs. 263-264.
 - "El Santo Crucifijo en las Escuelas", BOE de Valencia, 1 de julio de 1932, num. 2450, pag. 246.

El boletín eclesiástico de Segovia la había incluido por su parte ya en el mes de abril, como continuación de la publicación que hacía del decreto de 12 de marzo: sobre el se limitaba a señalar que era "opuesto a la realidad y se ha impuesto por la fuerza, contra la voluntad del pueblo eminentemente católico", tal como lo probaba el clamor levantado contra la retirada de los crucifijos ordenada anteriormente. (s.f. "Supresión de la asignatura de religión", BOE de Segovia, año 77, 30 de abril de 1932, num. 8, págs. 192-193).

hace mas urgente e inelucible nuestro deber de oponer a este abstencionismo una verdadera cruzada catequística que garantice debidamente la formación cristiana de nuestro pueblo y el mantenimiento de la fe de las generaciones venideras. Impidiendo que ni un solo bautizado, hijo de padres cristianos, cuyas almas están encomendadas a nuestra solicitud, quede sumido en las tinieblas de la ignorancia y comprometida gravemente su salvación."

A fin de cumplir el objetivo propuesto el prelado asignara al recién creado Secretariado estas funciones: promover escuelas de religion en todas las parroquias; organizar la enseñanza religiosa en los distintos grados; incluir "entre las circunstancias lo aconsejan, cursos superiores de religion y semanas de caracter sociológico y pedagógico"; fomentar el reclutamiento y formación de catequistas Auxiliares; proporcionar el personal docente mas indicado para la dirección de las escuelas de religion; organizar asociaciones parroquiales e interparroquiales de padres de familia, que pudieran fundar escuelas privadas e impedir transgresiones de la neutralidad en materia religiosa en la enseñanza oficial; fomentar otras en relación con la instrucción religiosa (certámenes, concursos catequísticos, etc.) y realizar propaganda de la cultura religiosa. El Secretariado debería llevar, además, una estadística de las escuelas que existieran en cada parroquia, el censo de los obligados a asistir al catecismo, el de los que realmente asistieran y el de los catequistas.

(136) 8 de abril de 1922. "Decreto estableciendo el Secretariado Diocesano de Instrucción Religiosa", EDE de Orizuela, año XI, 16 de abril de 1922, núm. 6, págs. 151-154.

A continuación de este decreto episcopal publicaba el boletín los actos de instrucción religiosa para niños y jóvenes por los que se procedía a inaugurar las escuelas de religión en las parroquias de la ciudad y, seguidamente, el horario y lugares del "curso escolar de religión" que, aparte de señalar las distintas catequesis que se implantaban, contenía un "curso superior de religión" para mayores de 15 años así como un "curso pedagógico para catequistas".⁽³³⁹⁾

Como complemento de estos documentos el mismo boletín reproducía otro del nuevo Obiterinario en el que se describía la sesión inaugural y las palabras pronunciadas en ella por el prelado, palabras que abundaban en la línea de autoritativa que ya hemos visto generalmente iniciada por los obispos de León y de Pamplona, si bien una al juicio sobre la actuación sacerdotal el atenuante de la propaganda contraria al espíritu cristiano; reflexionaba, así, el obispo indicando que "... por no haber sabido aprovecharnos de los derechos que tenemos los católicos para que éstos se instruyeran debida y solidamente, y no haber prestado en la vida parroquial, y la función docente la atención necesaria y suficiente, hemos visto con profundo dolor como gran parte del pobre pueblo se ha alejado de la Iglesia, tanto por ignorancia, como por la activa y fácil propaganda de ideas disolventes y halagadoras que es necesario a todo trance contrarrestar, desinfectando⁽³⁴⁰⁾ las almas del veneno corrosivo del error y nutriendolas⁽³⁴¹⁾ con los reconstituyentes salvadores de la verdad católica."

(339) Ibid, págs. 154-155.

(340) En cursiva: ílla en el original.

El camino para llegar a alcanzar este fin, mientras no dispusieran los católicos del "suficiente número de escuelas privadas" decía el prelado- no era otro que el de crear escuelas de religión en los templos para niños y adultos, para lo cual debía procederse a la correspondiente formación de catequistas de ambos sexos, labor a la que contribuiría, con independencia de otros fines, la "Congregación de la Doctrina Cristiana", que pasaría a erigirse en la iglesia catedral para toda la diócesis; el Dr. IKASIOKZA concluía sus palabras señalando su esperanza en obtener, por la actuación del secretariado, una "instrucción religiosa sólida y universal entre los fieles diocesanos cual la requiere la extrema necesidad de los tiempos presentes".¹¹⁴

Sería el Dr. EILIO Y LAKAY uno de los prelados que trataba el tema de la enseñanza por medio de una pastoral, como había hecho el obispo de Palencia, si bien en este caso lo haría con carácter monográfico. Afirmaría que "la principal víctima del odio a la Religión es el alma del niño" y, dirigiéndose a los padres de familia, añadiría que de lo que sus hijos fuesen en la infancia dependería "todo su porvenir, y el de vuestros apellidos y el de la Patria", siendo el único obispo que haría alusión expresa a la contribución de todos los ciudadanos al mantenimiento de la enseñanza estatal al insistir en que esta estaba igualmente sostenida con los tributos de los católicos, razón por la que decía, en comentario que contrasta con el que acabamos de ver en la pluma del Dr. MUNIL¹¹⁵ el Estado "que se reconocía católico porque casi la totalidad de sus ciudadanos lo son", les aliviaba anteriormente de "la carga" de la enseñanza religiosa y, sin embargo, hoy dejaba sobre los padres el deber de proveer a esa enseñanza.

(114) *Ibid.*, págs. 143-144.

Para el cumplimiento de tal deber, que compartían con los sacerdotes, debían encaminar a sus hijos hacia la Iglesia y dotar a esta de los medios suficientes para formarlos; siendo esta la finalidad de la "Asociación Católica de Padres de Familia" Les aconsejaba que se inscribieran en ella para, unidos, hacer frente al laicismo en la enseñanza, a cuyo fin y con motivo de la reunión de la asamblea de Madrid de dicha asociación, "44" disponía la

(142) Hemos encontrado publicado el programa de tal reunión en el boletín eclesiástico de la diócesis de Segovia, en el que, a modo de noticia, se anunciaba su convocatoria "para los primeros días de Mayo", siendo el motivo del encuentro "la defensa de la escuela católica". No se privaba de señalar el redactor que la reunión habría de ser de una gran amplitud y "preparatoria del movimiento nacional que va a iniciarse" y "de preparación de futuras actuaciones". Los trabajos de la reunión se dividirían en seis secciones a cargo de los ponentes que indicaba: "La Escuela y la tradición española"; "Organización de la enseñanza en el extranjero"; "El reparto proporcional escolar en España"; "Defensa de la enseñanza católica frente a las disposiciones vigentes"; "Organización de una campaña en defensa de la libertad de enseñanza" y "Plan de propaganda y organización en Madrid y su provincia" (S.F. "Asamblea de Padres de Familia", BUE de Segovia, año 77, 30 de abril de 1932, núm. 3 pág. 204). Ni en este boletín ni en el de Madrid-Alcalá hemos encontrado la reseña posterior de este acto.

No aparecerían nuevas noticias sobre la actuación de las asociaciones de padres de familia en 1932 hasta que, en su sección "Crónica General", publicara el boletín eclesiástico de la diócesis palentina la reseña de la primera reunión del "Consejo nacional de la Asociación de Padres de Familia"; reunión en la que se trazó el plan a seguir "con decisión y con empeño, siempre, como es natural, dentro de la Ley". En tal reunión se analizaron los problemas de la asociación en Córdoba y Carrion de los Condes, donde se había clausurado el local en que tenían su sede las respectivas asociaciones sin causa justificada, acordándose por ello que una comisión visitara al ministro de la Gobernación, (S.F. "Crónica General", "Las primeras actuaciones del Consejo nacional de la Asociación de Padres de Familia", BUE de Palencia, año 82, 31 de octubre de 1932, núm. 21, pág. 611).

Más explícita sería la reseña dada por los boletines eclesiásticos de las diócesis de Oñhusa y Granada sobre la "Asamblea de Padres de Familia" celebrada a finales de octubre y en la que fue aprobado el "programa de Acción Confederatal"; destacando sus puntos más interesantes estos eran: creación de un organismo en cada diócesis ("Consejo Diocesano de Enseñanza"; "Liga Diocesana" o "Comité Diocesano de Escuelas") cuyas funciones serían: coordinar todos los patronatos y agrupaciones dedicadas a la educación cristiana, tramitar y resolver los asuntos relacionados con la enseñanza católica y allegar los recursos necesarios mediante donativos, suscripciones y colectas en las iglesias. Además el programa proponía tres ac-

cuaciones: a) crear y sostener escuelas católicas que ofrecieran mejores condiciones que las escuelas oficiales, b) patrocinar "obras circunesculares y postesculares que atraigan y recojan a los niños que acuden a las escuelas oficiales católicas". La primera de ellas sería el catecismo parroquial, otras podrían ser: cantinas escolares, oratorios festivos, colonias de excursiones infantiles, etc., y c) vigilar la escuela oficial, denunciando "a aquellos maestros que quebrantan la norma de neutralidad religiosa, política y social". La f. "Acción Católica. Programa aprobado en la Asamblea de Padres de Familia", BOE de Orizuela, año 51, 1 de noviembre de 1932, núm. 17, págs. 378-379, y s.f. "El programa aprobado en la Asamblea de Padres de Familia", BOE de Granada, año 57, 15 de noviembre de 1932, núm. 3513, págs. 311-312. Mas tarde el boletín de la diócesis de Orizuela núm. 21, de 20 de diciembre, págs. 443-444, volvería a efectuar la publicación de este programa, no constando en ninguna de las citadas reseñas el lugar en que se celebró la asamblea.

Ya hemos hecho referencia a las noticias de las actividades de las asociaciones católicas de padres de familia publicadas por distintos boletines diocesanos en 1931 (ver la nota núm. 451). Estas de 1932 revelan que las exhortaciones de los prelados no dejaban de estimular a los fieles en pro de una acción coordinada en defensa de la enseñanza confesional.

Por esta razón creemos oportuno consignar aquí la medida adoptada por la Dirección General de primera enseñanza por circular de 23 de noviembre de 1932, para lo cual hay que hacer previa alusión al decreto dictado por el gobierno provisional en 9 de julio de 1931 creando consejos provinciales y locales de primera enseñanza y consejos universitarios en sustitución de las anteriores Juntas de igual denominación. Este decreto, al aludir a la elección de los componentes de dichos consejos se limitó a señalar, entre otros, "un Maestro y una Maestra nacional designados por la Asociación respectiva de la provincia" y "un padre y una madre de familia elegidos por las Asociaciones de padres, cuando las hubiere" (arts. 29, 68 y 148). Pues bien, por la citada circular de 23 de noviembre de 1932 la mencionada Dirección General pasó a dar normas de desarrollo, estableciendo, entre otras cuestiones lo siguiente:

119 Serán las Juntas directivas de las Asociaciones no confesionales de Maestros legalmente adheridas a las organizaciones nacionales, las que en reunión conjunta harán la propuesta de Vocales Maestros para los consejos universitarios y provinciales de Primera enseñanza.

120 La propuesta de padre y madre de familia, conforme preceptúa el artículo 62 del Decreto orgánico, corresponde a las Directivas de las Asociaciones de padres de familia constituidas legalmente, que existan en la localidad, siempre que no tengan carácter confesional. Si no existen o tienen este

carácter, la elección se hará de esta forma: Se convocarán en un mismo día a los padres, madres o tutores de los niños asistentes a cada Escuela Nacional, para que designen, mediante votación, un representante por cada Escuela unitaria o sección de graduada. Esta elección será presidida por el Maestro o Director de la Escuela. Los representantes de todas las Escuelas de cada localidad, a su vez designarán, por votación, el padre y la madre, como Vocales en los Consejos provinciales o municipales de protección escolar. La sección será convocada y presidida por el Maestro o Maestra más antiguo de la localidad, o sea el que lleve más años de ejercicio en ella."

Estas medidas, como se ve, atacaban en su raíz las posibilidades oficiales de actuación, tanto de las organizaciones confesionales del magisterio como de las de padres de familia, todas las competencias atribuidas a los consejos escolares por el decreto de 1911.

Por esta razón, al comentar las leyes de reforma de la enseñanza aprobadas por el Consejo de Ministros el 1.º y 2.º de diciembre, y que, como proyecto de ley titulado "Bases para la primera y segunda Enseñanza", sería presentado seguidamente a las Cortes por Fernando DE LOS RÍOS, como un primer paso para la redacción definitiva de la Ley de Instrucción Pública prevista en el artículo 49 de la Constitución que, no obstante, nunca llegó a promulgarse, fue "El Debate" extremadamente duro, denunciando la deposición de la privacidad estatal sobre los derechos a la prole inherentes a los padres dando solo un escaso apoyo a la iniciativa privada, a la que ponía límites y trabas tales, que imposibilitan la libre concurrencia:

"Así vincula a unos Consejos provinciales de protección escolar el derecho de revisar las escuelas privadas y proponer su continuación y clausura. Consejos provinciales ya definidos de antemano en un decreto y en una circular, en los que se niega toda representación a las Asociaciones de maestros católicos y a las organizaciones confesionales de Padres de Familia, ¿quien no ha de ver en esta base un arma de persecución? Porque es bien claro que el Estado (activo y neutral), se sale así de su esfera, asegurándose en la enseñanza privada un intervencionismo caprichoso que va más allá del legítimo de velar por la moral, el orden público y las leyes. Y menos mal que no se hace obligatoria la asistencia a la escuela del Estado.

...

"Deducimos, en suma, de esta primera creada, que el Estado español se atierra a un régimen de monopolio docente. Nada de libertad de enseñanza. Mucho menos un sentido equitativo de justicia distributiva que se aterque al reparto proporcional escolar. Las escuelas estatales son sufragadas por todos los españoles. A las privadas se les cierra el camino de obtener la equiparación financiera que han alcanzado en Inglaterra, en Holanda y en

Belgica, y por si fuera poco, se condiciona su vida al dictamen de unos organismos, en los que se despiaza con espiritu de secta, a una gran parte de la sociedad. Mal podrán cumplir los padres de familia la obligacion constitucional de "educar e instruir" a sus hijos, si el propio Estado les dificulta en el libre ejercicio del mas sagrado de sus derechos naturales.

«Por otra parte, en fin, el Estado no teme atribuirse un ambicioso y desmesurado proposito que en sodo alguno podrá cumplir. Hacerse cargo de toda la enseñanza es una aventura de la que Mexico, Rusia y Francia ofrecen ya resultados lamentables. Y no es suicida el Estado que, sin reparar en la imposibilidad de ejercer integralmente un papel de educador, que solo le corresponde en grado supletorio, empieza por dificultar las iniciativas de la sociedad a quien de pleno derecho corresponde la funcion docente de sus miembros?»

Junto a estas criticas, en las que destacan los poderes que se conferia a los Consejos escolares sobre todo tipo de escuelas y de los que los catolicos quedaban excluidos, reconocia el editorial los aciertos de la organizacion tecnica de las escuelas de enseñanza primaria y, sobre todo, los de la secundaria haciendoles a los que ya se habia referido en otro editorial del dia 11 de noviembre), donde el monopolio estatal era menos contundente, existiendo, si no la libertad de enseñanza y el reparto proporcional, si un reconocimiento mas explicito de los centros privados y no viniendo condicionada su existencia "al capricho de un organismo estatal". Acababa el editorial alabando los nuevos planes de segunda enseñanza, de los que, logicamente, lamentaba la ausencia de la religion, lo que mutilaba "gravemente la formacion de la juventud española.

(«La reforma de la enseñanza, "El Debate", 11 de diciembre de 1962).

Al decreto y circular aludidas en el editorial ya habia hecho el periódico la correspondiente critica en su sección "Lo del dia", en la que daba cuenta de la conferencia pronunciada en la Casa del Pueblo el dia 5 de diciembre por el Director General de Primera enseñanza, Rodolfo LLOPIS, conferencia en la que habia destacado la influencia que en la vida de la escuela podian ejercer los padres de familia y en la que, segun el periódico, habia afirmado "si os preocupais de la escuela y en torno a cada una de ellas creais la Comision de Padres y el Consejo escolar, yo os digo que la vida de esa escuela se transformará si necesita transformarse". A ello añadia el tonterista que lo que el conferenciante queria decir era que sobre la escuela "solo tienen derecho los padres de familia que sean socialistas", ya que "la escuela que no sea apta para el socialismo no podrá existir porque la transformarán enseguida los padres socialistas que monopolicen esas Comisiones escolares". Para basar esta afirmacion recordaba el redactor como hasta ese momento no habian existido en España mas organizaciones de padres de familia que las catolicas y que, sin embargo, el decreto que creaba las "Comisiones escolares de Padres" y la circular de la Direccion General de Primera enseñanza excluian de representacion en esas comisiones a las asociaciones catolicas. Esta era la razon de que el conferenciante se dejara de que hasta esa fecha no hubieran llegado mas que dos peticiones para organizar esos Consejos

escolares va que "su sectarismo le ha vedado conocer el magnífico movimiento que se registra en toda España de las organizaciones de Padres de Familia católicos, a los que asiste un derecho natural tan respetable y tan sagrado para velar por las escuelas de sus hijos como a los socialistas".

A ello añadía el comentarista:

"¿Qué conciencia honrada puede dejar de apreciar tanta arbitrariedad? Escuelas influenciadas por los socialistas y por sus afiles, pero costeadas, como no se recata de decir el propio conferenciante a renglón seguido, "con el dinero de todo contribuyente español". O lo que es lo mismo, una imposición a los ciudadanos católicos para que con su propio dinero costeen la enseñanza atea y socialista de sus mismos hijos. Y aun le extraña al director de primera enseñanza que pidamos, como imperativo de justicia, el reparto proporcional escolar, que, en síntesis, significa escuelas socialistas pagadas por los socialistas y católicas para los católicos

(véase una vez más como se interpreta, por sus propios peritajes, el concepto tan decantado de libertad, y véase también si teníamos o no razón cuando afirmábamos que en el Ministerio de Instrucción Pública campea una política escolar de franco partidismo socialista."

"Lo del día - padres de familia socialistas" "El Debate", 7 de diciembre de 1932).

La siguiente noticia en relación con la política gubernamental para evitar la beligerancia de las asociaciones católicas de padres de familia aparecía el día 18 publicando la instancia cursada por el presidente de la "Confederación Católica de Padres de Familia" al ministro de Instrucción Pública en la que pedía la revocación de la circular de 23 de noviembre a fin de que, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto de 9 de julio de 1931, "sea admitida en los Consejos escolares la representación de cualesquiera Asociaciones de Padres de familia, siempre que estén legalmente constituidas, aunque sean confesionales."

("Los padres de familia contra la circular que los excluye", "El Debate", 18 de diciembre de 1932. Ver el apéndice núm. 16. La comparación de este titular con el del día 7, antes comentado, no deja de hacer pensar que para el periódico de Angel HERRERA el padre de familia auténtico no era más que el católico).

El siguiente comentario de "El Debate" sobre el ataque a la enseñanza privada y la negación de todo protagonismo a los padres de familia católicos estaría constituido, otra vez, por un extenso editorial en que volvía a criticarse las bases de reforma de la enseñanza, esta vez referidas únicamente a la enseñanza primaria, crítica en la que se abundaba en las ideas hasta ahora expuestas sobre monopolio estatal de la enseñanza primaria, ataque a la privada y funciones y composición de los "Consejos de Protección Escolar."

("El duro ataque a la enseñanza privada", "El Debate", 31 de diciembre de 1932. Ver el apéndice núm. 17).

realización de una colecta extraordinaria "cuyos fondos se destinarán a la creación de escuelas católicas, mejora de las ya existentes e intensificación de la catequesis" (143).

Segua a esta pastoral una circular relativa a la formación de catequistas en los colegios de religiosos o religiosas, a fin de "multiplicar la Catequesis para los niños que no asisten a ellos, sino a las escuelas e institutos del Estado", frase en la que, como se ve, hay una nueva alusión implícita al decreto de 12 de marzo; dichos colegios deberían remitirle los programas de religión impartidos en los distintos cursos. (144)

No publicaría el Dr. D. Manuel DE CASTRO ALONSO, arzobispo de Burgos, escrito alguno sobre el tema que nos ocupa, aunque es de suponer que, al menos, inspiraría el que sin firma ni fecha fue publicado en el boletín de la archidiócesis de 16 de mayo y en el que se seguía la estruc-

En contraste con la atención prestada por el periódico de Angel HERRERA al tema de la exclusión de las asociaciones confesionales de los consejos escolares, no aparece en ningún boletín eclesástico consultado alusión alguna a este tema, siendo la reforma de la enseñanza una cuestión sobre la que la jerarquía guardó silencio. Sílo hemos encontrado un breve y poco informado comentario en el boletín diocesano de Palencia; "No sabemos si cuando estas líneas salgan a la luz se habrá publicado ya el reglamento de escuelas de primera enseñanza. Es asunto que los venerables parrocos no deben dejar al olvido; cierto que no sabemos cómo va a venir, aunque suponemos, con fundamento, que vendrá informado del espíritu laicista y setiano de la Constitución. Pero como quiera que venga debemos estudiarle con serenidad, por si ello nos obligase, en algún caso, a defender los derechos de la Iglesia, dentro de la Ley". (s.f., Crónica General. Un reglamento que se espeta con interés, BOE de Palencia, año 82, 15 de noviembre de 1932, núm. 22, pág. 635).

(143) 24 de abril de 1932, "Pastoral " BOE de Madrid-Alcalá, 2 de mayo de 1932, núm. 1558, págs. 157-162.

(144) 18 de abril de 1932, Ibid., págs. 162-163.

tura argumental que ya hemos visto en otros documentos de la jerarquía, si bien este caso no se descendía a dar normas especiales de organización de las catequesis parroquiales. Comenzaba el escrito aludiendo, en este caso en forma expresa, al decreto de 12 de marzo así como al de 6 de mayo de 1931, indicando que este había sido "anulado" el 14 de enero de 1932; también se refería a la carta enviada por GIL ROBLES al ministro de Instrucción Pública "protestando por la actitud de muchos maestros con los discípulos católicos". Hecha esta introducción, afirmaba que las normas citadas lesionaban "los derechos sacratísimos de la Iglesia, el derecho natural de los padres de familia y de las almas de los niños, máxime en una nación casi en su totalidad católica" y que así lo había manifestado por "la protesta unánime de innumerables pueblos" ante la supresión de la enseñanza religiosa a niños y jóvenes. Seguidamente, en contraste con el juicio crítico que habían encerrado las palabras del arzobispo de Sevilla sobre esta cuestión, se limitaba a constatar, sin fundamento argumental alguno, que "los padres de familia... no pueden, a pesar de sus buenos deseos, darles la instrucción y cultura religiosa a que tienen derecho..." irase que, por su falta de un razonado apoyo, solo cabe unir a la hipótesis de la falta de formación que, a su vez, tenían los referidos padres. Por la imposibilidad de estos en cumplir tal tarea, los sacerdotes y catequistas deberían redoblar sus esfuerzos y actividades "interesando la generosidad de las almas buenas para conseguir que los niños y jóvenes adquirieran en catequesis, escuelas parroquiales y centros postescolares el conocimiento proporcionado de las verdades de nuestra religión, que tan necesarias son para formar cristianos prácticos y honrados ciudadanos". nueva alusión -tan cara a la jerarquía- de la conexión entre religión y entramado

social.***

Es imposible dilucidar si los argumentos esgrimidos por el Dr. Jose VILA MARINÉZ, obispo de Gerona, para convencer a sus diocesanos de que se inscribieran en la "Asociación de Padres de Familias", respondían al conocimiento erróneo de los hechos que aun pudiera tener este prelado o a su interés en presentar una situación alarmista con el fin de forzar la actuación de los fieles; lo cierto es que ya a mediados de mayo dictó una pastoral en la que aun trataba como tema central el de la libertad de enseñanza, como si tal libertad no hubiera quedado reconocida ya constitucionalmente excepto en lo que a las órdenes religiosas se refería, tema este al que el prelado no aludiría especialmente, aunque fuera el único que podía justificar el enojo de sus palabras.

Destacaba el obispo que "la sana filosofía" condenaba el monopolio estatal de la enseñanza, "la escuela única", reiterando el argumento de que el derecho a educar a los hijos era, en el orden natural, exclusivo de los padres, perteneciendo a la familia el de erigir escuelas elementales, función que realizaba a través del municipio como "primera agrupación social de familias". Como contraste a esta argumentación, y obviando el carácter político-administrativo de los municipios, añadía que "el monopolio de las escuelas, en cuya virtud la autoridad civil se reserva únicamente la facultad de erigir escuelas, repugna al derecho natural. Y la repugnancia con el derecho natural es mucho mayor si las leyes obligan a los padres a llevar a sus hijos a aquellas escuelas del Estado (o sea, si la escuela llegara a ser única y obligatoria)".

(145) s.f. "Supresión de la enseñanza de la religión en los centros de enseñanza", BOE de Burgos, año 75, 16 de mayo de 1932, núm. 9, págs. 168-170

Esto, que parece que el Dr. VILA MARTÍNEZ formulaba como hipótesis, ya se estaba produciendo, a su juicio, en la práctica, si bien la explicación que daba para corroborar este aserto era, como no podía ser de otra forma, harto confusa, por cuanto al referirse al laicismo impuesto por el Estado no especificaría con claridad que ello era única y exclusivamente en el ámbito de la enseñanza oficial; diría así, en frases en extremo agresivas, que todas las doctrinas sobre monopolio de la enseñanza estatal a que anteriormente se había venido refiriendo, se traducían "en leyes y preceptos que consagran el laicismo y el ateísmo de la escuela impuesto por el Estado, y destruyen así el fundamento de la familia, aunque sea con peligro de llegar por este camino a un pueblo de fieras y de salvajes, y por supuesto de analfabetos. Porque se ha dicho muy ingeniosamente que el monopolio de la enseñanza por el Estado produciría la nivelación de todos en la ignorancia".

Ante ello la familia debía proteger el derecho a la educación de sus hijos defendiendo la libertad de enseñanza "y si estos derechos y libertades son impugnados desde el campo de la política, parece que será menester acudir al campo de la política para defenderlos".

A continuación el obispo se preguntaría por la razón de la apatía de muchos padres ante los negativos caminos por los que se iba encauzando a la enseñanza, pretendiendo hacerles ver lo que tenía de peligrosa la injerencia estatal, para lo que, entre otros argumentos, diría: "¿no ven (los padres) que si se dejan arrebatar el derecho a la educación de los hijos, pierden mucha fuerza moral para defender el derecho a la propiedad de sus bienes y heredades? ¿o a lo menos, como no se mueven las madres, que suelen ser tan linceas para adivinar y precaver el daño de los hijos? ¿como ellas no mueven y enardecen a los maridos?",

significativas frases que revelan tanto la simbiosis que para el prelado catalán tenían los bienes morales y materiales como su consideración del papel y poder de las mujeres en el ámbito familiar.

Enlazando todos estos argumentos con su referencia anterior a la actuación política, añadiría que como "la fuerza unida se hace más fuerte" era necesario que los padres se asociaran "para defender por todos los caminos legales el derecho de su patria potestad", siendo el medio idóneo la "Asociación de Padres de Familia", a través de la cual podrían asistir a sus hijos en las federaciones de estudiantes católicos y en las juventudes católicas, "para luchar con ellos; indicando lo oportuno que sería "que en una campaña por la libertad de enseñanza, por ejemplo, junto a la voz de las federaciones de estudiantes, suene la voz de las Asociaciones de Padres de Familia", a través de las cuales se podían conseguir mucho más fácilmente finalidades como la defensa de los derechos respecto a la educación de sus hijos, "la protección y fomento de escuelas, liceos, universidades, para enseñanza católica; la procuración de la libertad de enseñanza, la formación de los mismos padres de familia para educar cristianamente a los hijos; la lucha contra la pública y privada inmoralidad de la prensa y espectáculos...", debiendo inscribirse también en estas asociaciones todos cuantos quisieran defender a los religiosos en el campo de la enseñanza, porque "nadie defenderá mejor a los maestros y maestras religiosos que los mismos padres de los alumnos de aquella enseñanza agrupados en asociación". Por tales razones debería haber en cada municipio una de estas asociaciones, que se reunirían en la federación de la ciudad, al igual que en toda España existía la confederación de asociaciones de padres de familia.

(146) Ver la nota núm. 95 y el apéndice núm. 13.

Acataba el prelado su exhortación señalando la necesidad de rogar al Espíritu Santo, a fin de impetrar su luz "para que actuando como piden las circunstancias en defensa de nuestra Santa religión y de la paz y orden social, logremos que aparte de nosotros los azotes de su ira, que merecemos por nuestros pecados", frase bastante elocuente sobre la conexión que, en consideración del obispo, existía entre providencia divina, actuación estatal y actitud de los católicos."¹⁴⁷

Un mes más tarde publicaría el Dr. VILA MARTÍNEZ una "exhortación" dirigida al clero de su diócesis dándole las oportunas instrucciones sobre la organización de las catequesis y la ayuda a prestar a los parrocos en la enseñanza de los niños así como señalando sus obligaciones en orden a la predicación sagrada para los adultos en las misas de los días festivos."¹⁴⁸

También mediana junio cuando otro obispo catalán, el de Barcelona, se ocuparía de la reorganización de la enseñanza católica en su diócesis para lo que pasaría a crear un nuevo órgano: el "Comité Diocesano de la Escuela católica", cuyo fin sería "apoyar moral y materialmente a las Escuelas Católicas primarias ya existentes, fomentar su ampliación y aun erigir otras nuevas según lo reclamen las necesidades", dicho Comité, del cual se reservaba la presidencia, estaría integrado por sacerdotes y seglares de ambos sexos.

(147) 18 de mayo de 1932, "Necesidad de una actuación mediante la Asociación de Padres de Familia para defender la libertad de enseñanza y el derecho a la educación de los hijos", BOE de Gerona, año 76, 21 de mayo de 1932, num. 5, págs. 119-124.

(148) 18 de junio de 1932, "Exhortación y disposiciones sobre enseñanza de catecismo y predicación sagrada", BOE de Gerona, año 76, 22 de junio de 1932, num. 6, págs. 154-160.

A continuación de la publicación de este decreto episcopal insertaba el boletín los primeros acuerdos del Comité, que había comenzado a funcionar el mismo día de su constitución -"previa presentación y registro de sus Estatutos en el Gobierno civil de la provincia"-; según dichos acuerdos quedaba dividida la ciudad en distritos escolares, nombrándose en cada uno de ellos una Junta local bajo la presidencia del respectivo parroco o economo, dicha Junta informaría al Comité sobre las escuelas católicas de su demarcación a fin de "apoyarlas moral y económicamente", deberían formar parte de ella "representantes del Magisterio católico, y señoras propagandistas", aclarando después la nota que los distintos miembros del Comité eran "dignísimas personas, que dejadas aparte sus ideologías particulares, siempre respetables" deseaban trabajar por la enseñanza católica en las escuelas, "cuestión de vida o muerte para el porvenir de nuestra Patria".¹¹⁴⁹

(149) 16 de junio de 1932, "Decreto creando el Comité Diocesano de la Escuela Católica" y nota complementaria, BDE de Barcelona, año 75, 30 de junio de 1932, núm. 12, págs. 245-246.

Desde la publicación de este escrito al nuevamente redactado por el Dr. IRURITA en 30 de agosto, no se produciría ningún otro documento oficial del obispado catalán. Es de destacar que el cardenal VIDAL no publicó documento alguno en todo el periodo sobre la cuestión de la enseñanza aunque fue tema que, como hemos destacado en la nota 56, estuvo siempre presente en los acuerdos adoptados en las conferencias de la provincia eclesiástica desde los comienzos de la República; en dicha nota hemos apuntado también que ya existía en ella, antes del advenimiento del nuevo régimen, una Comisión interdiocesana para intensificar la enseñanza del catecismo. Era, pues, cuestión que interesaba tanto al arzobispo de Tarragona como a sus sufragáneos y así, fue tratado nuevamente, como punto primero, en la conferencia episcopal celebrada en Barcelona el 18 de julio, según convocatoria que efectuara el cardenal desde Roma, donde se había desplazado, en unión del Dr. ILUNDAIN, para realizar la visita "ad limina".

Según consta en el acta de la conferencia se aludió en este primer punto a la posibilidad de creación de universidades católicas en España, "para el día en que se juzgue conveniente su implantación" -que el cardenal VIDAL no encontraba oportuna por el momento, dada la situación política y los problemas económicos de la Iglesia-, del trabajo en pro de la formación de maestros católicos, del fomento de residencias de estudiantes, de la protección moral y material de las escuelas particulares que se prestaran a dar enseñanza católica "según las

Como complemento de la circular numero 112, referida exclusivamente a la enseñanza del catecismo en las parroquias, y según la línea de organización que paulatinamente iba implantando la jerarquía, dictaría el Dr. MELO ALDALDE el 8 de julio la circular num. 117 en la que, siguiendo la pauta marcada por el obispo de Barcelona, creaba determinados mecanismos para reforzar la existencia y funcionamiento de las escuelas católicas. La razón en la que basaba las disposiciones que ahora dictaba venía determinada, según alusión implícita, por la posible futura prohibición de continuar la función docente a las órdenes religiosas. Comenzaba, así, señalando el arzobispo:

"Hechos conocidos de todos y por todos los católicos lamentados con igual intensidad, amenazas que vemos cernirse en el horizonte y que si Dios no lo remedia han de convertirse en realidades mas o menos pronto, ponen ante nuestra conciencia, como deber imperioso, la necesidad de que prestemos solícita atención y fervoroso impulso a la magna obra de sostener, intensificar y extender la enseñanza católica en nuestra muy amada Archidiócesis."

normas de los distintos prelados", -tema que iba en línea, como se ve, con las disposiciones dictadas por el Dr. URURITA el 16 de junio y reiteradas por el al mes siguiente, como exponeremos-, y de procurar, por último, que los sacerdotes que se consideraran aptos para ello, obtuvieran el título oficial de maestro.

(Església i Estat durant la segona..., III, págs. 21, 26, 123, 147 y 168).

Si, como hemos indicado, el cardenal VIDAL no suscribió en todo el primer bienio documento alguno sobre la cuestión de la enseñanza religiosa, aluden BATLLORI y ARBELLOA a la existencia en su archivo de dos proyectos de reglamento, sin fecha, sobre un "Comité de pedagogía religiosa en la Provincia Eclesiástica de Tarragona" o "Comité interdiocesano de pedagogía religiosa de la Provincia Eclesiástica Tarraconense" (op. cit., nota 8 de la pag. 272). Por otra parte el cardenal fundó en Tarragona el "Pedagogium", con el fin de coadyuvar a la formación de maestros católicos, la instrucción religiosa superior de los seglares y la preparación de los dirigentes de Acción Católica (Op. cit., págs. 26-26 y 276-279).

Por tal razón pasaba a organizar la "Junta de la Escuela Católica" que, en un principio, funcionaría en la capital y suburbios "y más tarde, cuando su experiencia vaya aleccionándonos y paulatinamente pueda desenvolver esta misma labor, en los pueblos donde convenga". Encomendaba la formación de la nueva Junta, que se constituiría bajo su presidencia, a la "Junta Diocesana de Acción Católica", que debería valerse para ello de la "Asociación C. de Padres de Familia", de la "Juventud Católica" y "de cuantos elementos estime oportuno incorporarse para realizar su cometido", el cual consistiría, en una primera etapa, en "designar personal para hacer las colectas y en nombrar Delegados que visiten las Escuelas y Colegios".

En cuanto a la colecta para la escuela católica que restauraba y que se debería realizar mensualmente, señalaba, más detalladamente que había hecho el Dr. IRUFITA al referirse al apoyo económico a prestar a dichas escuelas, que su importe se distribuiría en la siguiente forma: el cincuenta por ciento para subvencionar escuelas gratuitas en proporción al número de sus alumnos; un veinticinco por ciento para "pensionar proporcionalmente los colegios populares (semigratuitos)", y el veinticinco por ciento restante para la erección de nuevos centros de enseñanza católica.

Aquellas escuelas y colegios populares que quisieran ser favorecidos por las subvenciones de la nueva Junta deberían solicitarlo "y comprometerse a que su labor escolar será conforme a las doctrinas de la Iglesia; quedarán obligados a recibir la visita de inspección de los Delegados de la Junta, y a enviar mensualmente un parte exacto del promedio de asistencia"; mecanismo con el que indudablemente venía el arzobispo a incentivar la enseñanza propugnada por

la Iglesia.⁽¹⁵⁰⁾

Ya hemos visto como el Sr. D. Manuel GONZALEZ GARCIA, obispo de Málaga, para referirse a la cuestión de la enseñanza de la religión en los centros oficiales en octubre de 1931, se había limitado a reproducir un artículo suscrito por él cuando era arcipreste de Huelva que poco tenía que ver con la realidad que se estaba viviendo, y como había aludido también a este tema relatando una serie de "casos ejemplares" de estudiantes que cursaban la enseñanza superior en instituciones de carácter laico:⁽¹⁵¹⁾ "queremos recordar estos extremos porque parece que el obispo de Málaga no acertaba a dar un razonado tratamiento al problema planteado a la Iglesia en esta materia ni intentaba poner en su diócesis, como venía haciendo el resto del episcopado, organización catequética alguna; así, al menos, parece revelarse de escritos como los aludidos en los que, con pluma fácil, que a veces rayaba en la puerilidad, quería afrontar la cuestión de la enseñanza religiosa; otro ejemplo de ello se da cuando en 15 de julio de 1932 escribió un texto titulado "¡Marías, hay que hacer locuras!",⁽¹⁵²⁾ en el que instaba a las jóvenes de su diócesis a que colaborasen en la catequesis de sus parroquias y atendieran a las niñas y niños que asistieran a ellas; a que, si eran maestras, contribuyesen al establecimiento de escuelas católicas; a que hicieran labor de apostolado con las niñas y niños que las rodeen en su convivencia o trabajo diario; a que realizaran obra de difusión de propaganda católica y, en fin, a que creasen "grupos selectos y finos" ("las masas

(150) 8 de julio de 1932, "Circular núm. 117, Por la escuela católica", BOE de Valencia, 15 de julio de 1932, núm. 2151, págs. 221-223.

(151) Ver la nota núm 65 y el apéndice núm. 9

(152) Hay que advertir que las llamadas "Marías de los sagrarios", integraban una congregación sealar de jóvenes católicas, fundada por el propio Dr. GONZALEZ, Ver la nota 154 del capítulo "La Iglesia ante la República".

nunca son finas", diria) haciendo apostolado entre sus semejantes sociales y fijandose en "las de mejor indole y mas talento", todo ello a fin de que "las almas de los niños no pierdan a Jesus o lo recuperen si lo han perdido" y que "a nuestro alrededor se conozca y se buela a Jesus, se hable de El, se trabaje y se sufra por El" (153).

Mucho mas brevemente que harian otros prelados, relato el arzobispo de Zaragoza a finales de julio su visita "ad limina" destacando de ella el encargo que le habia dado el santo padre sobre la instruccion religiosa, encargo que enlazaba dicha instruccion con la necesidad de la formacion elemental propiamente dicha, entendiendo que la proliferacion de ideas contrarias al espiritu cristiano se debia tanto a la carencia de educacion en sentido amplio como a la estrictamente religiosa, pues a las deficiencias en esta diria el arzobispo recogiendo las palabras del papa- "y en muchos casos al analfabetismo", se debian "los estragos de las propagandas sectarias e inmorales". Por ello señalaba el prelado la precision de afrontar decididamente la "colaboracion en las catequesis, (la) ensenanza superior para jovenes de ambos sexos, (los) centros para prevenir a los estudiantes, (154) (las) escuelas catolicas diurnas para niños y nocturnas para obreros", medios, todos ellos, que reclamaban la "ayuda y concurso personal y economico de los catolicos", y para cuya consecucion anunciaba, "en sazon oportuna", un "plan de conjunto que responda a las

(153) s.f., "¡Mieras, hay que hacer locuras!", BGE de Malaga, año 65, 75 de julio de 1932, num. 7, págs. 181-184. Lo singular del estilo del Dr. GONZALEZ GARCIA, del que no se encuentra otro ejemplo entre el episcopado español de la epoca, nos hace incluir este texto como apéndice (ver el num. 18).

(154) Es difícil precisar, de esta definición, el carácter de estos centros.

necesidades presentes y a los temores futuros."'''

Preocupado por acudir en primer lugar al mantenimiento moral y material de las escuelas catolicas, el Dr. IRURITA no pasaria a diseñar la organizacion de la instruccion catequistica parroquial de su diocesis hasta finalizado el mes de agosto. Si bien debio ser este un tema que estudio detenidamente a juzgar por el detalle a que descendio llegando a establecer hasta el orden y modo en que debian impartirse los distintos temas a tratar en las catequesis. Para describir la nueva organizacion que implantaba comenzaba el obispo constatando -y ello es interesante- como al llamamiento efectuado con su creacion del "Comite Diocesano para la ensenanza catequistica" habian respondido "mas de doscientas escuelas particulares seglares de nuestra ciudad,"''' las cuales, junto con las numerosas escuelas de Religiosos y Religiosas y otras cuya construccion se proyecta solucionan en parte el gravisimo problema de la ensenanza catolica escolar primaria". Mas esta constatacion que, en principio, parecia halaguenta, no era, a juicio del prelado, suficiente "ante la encarnizada lucha que se esta librando entre el laicismo y la fe cristiana", razon por la que pasaba ahora a ocuparse de las catequesis parroquiales, comenzando por crear un "Comite para ensenanza catequistica extra-escolar" y un "Secretariado catequistico diocesano".

(155) 25 de julio de 1932, "Circular num. 116. Sobre la visita 'ad limina'", BOE de Zaragoza, año 71, 1 de agosto de 1932, num. 15, pags. 265-266.

(156) Dada la vaguedad del documento de 16 de junio anterior no es posible dilucidar en que habia consistido esta respuesta, sin embargo, no creemos aventurado pensar que, mediante normas particulares del citado Comité, se hubiera implantado una acción similar a la que acabamos de ver establecida por el arzobispo de Valencia.

cuyas funciones no especificaba, y dictando a continuación, como hemos indicado, prolijas normas sobre el funcionamiento de las catequesis en línea con lo que ya hemos visto que habían hecho otros miembros del episcopado (días en que debía impartirse la enseñanza, lugares, horas, diseño de las clases, catequistas auxiliares, erección de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias, enseñanza y predicación a jóvenes y adultos, cooperación de los religiosos, etc., etc.)""

Con breves líneas dirigidas a los padres de familia volvería a insistir el Dr. IRURIA en el tema de la enseñanza religiosa, si bien estas frases, incluidas en su pastoral del mes de octubre sobre el rosario, no se publicarían hasta el 30 de septiembre; exaltaba en dicha pastoral a la familia, aludiendo a los deberes de los padres e hijos y a las leyes y actuaciones que, en relación con el matrimonio, la amenazaban, señalando que una de las "consignas comunistas" era destruirla y eliminar todo sentimiento religioso, razón por la que decía a los padres:

"¿Qué haréis para salvar vuestras casas? Ya vuestros hijos no oíran hablar de Dios en las escuelas públicas, ya no se les enseñará a rezar, y Dios quiera que no se les enseñe a blasfemar... por eso no debéis pasar: debéis hacer todo lo posible para que no prevalezcan esas disposiciones laicas sobre la enseñanza. Pero, al mismo tiempo, debéis suplir en casa lo que falta en la escuela."""

(157) 30 de agosto de 1932, "Circular VIII, Sobre la Enseñanza Catequística en las Parroquias", BOE de Barcelona, año 75, 31 de agosto de 1932, núm. 16, págs. 321-326.

(158) 15 de septiembre de 1932, "Exhortación pastoral sobre el mes de octubre. El Rosario en familia", BOE de Barcelona, año 75, 30 de septiembre de 1932, núm. 18, págs. 357-363.

El Dr. MUGICA se había limitado a principios de febrero a aconsejar a los parrocos la docencia del catecismo, perfeccionando unas sucintas normas de actuación. El 9 de septiembre, festividad de la patrona de Guipuzcoa, suscribía una extensa circular reiterando, ahora pormenorizadamente, aquellas instrucciones y dando como razón para ello las alusiones de los pontífices en que se hacía constar "que la mayor parte de los tremendos males que lamenta la sociedad actual es la falta de instrucción y educación religiosa", de ahí que, recordando que la iglesia era la institución que más había favorecido las ciencias y las artes, señalaba que, no obstante, su misión más excelsa era la de impulsar la formación cristiana, no habiendo existido "jamás" "tiempo y días en que fuera más necesario, urgente y perentorio" realizar esta enseñanza y ello por dos hechos: la supresión del crucifijo en las escuelas públicas y la prohibición de toda enseñanza religiosa en ellas, y así como el primero había sido paliado en parte por la actitud de los fieles, al portar cada uno su crucifijo, necesario era hacer ahora el consiguiente esfuerzo para paliar el segundo, a cuyo fin, y tras reseñar los cánones que regulaban la materia de la formación religiosa y las obligaciones que a cada uno atañían en este campo, dictaba una larga serie de disposiciones sobre días y horas de celebración de la catequesis, catequistas auxiliares, preparación de los niños que ya hubieran recibido la primera comunión (para lo que aconsejaba, a fin de retenerlos en la catequesis, que esta se hiciera privadamente al tener uso de razón, aguardando a los diez años para que se hiciera en forma solemne), obligaciones de los padres, de "los amos" y de los padrinos, etc., etc.⁽¹⁵⁵⁾

(155) 9 de septiembre de 1932, "Circular núm. 139, La enseñanza del Catecismo", BOE de Vitoria, año 68, 15 de septiembre de 1932, núm. 19, págs. 469-478.

Inicio el obispo de Calahorra la serie de extensas pastorales que, en el ultimo trimestre de 1932, dedico la jerarquia al tema que nos ocupa. Firmada en 29 de septiembre pero no publicada hasta el 7 de octubre, su allocucion versaria integramente sobre la ensenanza religiosa, comenzando con unas graves afirmaciones sobre la actuacion seguida por el regimen republicano, que contrastan vivamente con el estilo de otros prelados sobre el mismo punto:

"De todas las heridas que, desde hace año y medio, premeditada y tenazamente, se vienen infligiendo a la Iglesia Española, con ser ellas tantas, tan hondas y crueles, ninguna mas dolorosa y mas grave, aun cuando sus desastrosas consecuencias para las almas y para la sociedad no se sientan plenamente desde luego, que la causada por la persecucion, realizada en parte y en parte coaccionada, contra la ensenanza religiosa."

Tal actuacion era para el prelado algo "racionalmente inconcebible" y solo explicable por "la lucha eterna del mal y del error contra la verdad y el bien", lo que hacia que en un pueblo que debia lo mejor de si al cristianismo, sin el que no podia entenderse su historia, se prohibiera su ensenanza y se hicieran desaparecer sus centros culturales mejor dotados por el exclusivo hecho de darse en ellos formacion religiosa; y ello dandose como motivos "la neutralidad del Estado" y "el respeto a la conciencia del niño", razones ambas que no eran mas que "un error, como lo sera siempre el ateismo"; mas, aun admitiendo aquella neutralidad, no cabria deducir de ella "otra legitima consecuencia que la de la incapacidad radical del Estado para enseñar, debiendo dejar esta funcion, en plena libertad, a aquellos a quienes por derecho natural compete...", y todo ello porque "el laicismo en la ensenanza o la escuela laica son, en teoria, una mutilacion intelectual y un absurdo científico y, en la practica una mentira hipocrita" y que "... en realidad ni ha sido, ni sera nunca otra cosa, que sectarismo antirreligioso"; por

ello la Iglesia "que estaria tal vez dispuesta a transigir, en aras de la paz, aun a costa de otros intereses suyos, jamas (entendiendolos todos), jamas transigira, ni cedera, ni callara ante la imposicion del laicismo en la ensenanza..." y, asi, "si se cierran a la verdad religiosa las escuelas oficiales, la Iglesia la ensenara en las librerias; si se la despojare de estas, la ensenara en los templos; y si se la arrojara de estos, la ensenara en las plazas publicas o, llegado el caso, en las catacumbas".

Una vez dichas estas fuertes y catastrofistas frases, se dirigiria el prelado a los fieles para pedirles, como si de dos instancias distintas se tratara, que ayudaran a la Iglesia, destacando como esperaba especialmente esta ayuda de los padres de familia catolicos "cuya causa en este punto viene a confundirse con la de la Iglesia" al violar el Estado los derechos de ambos que, en lo que a los padres atañia, era tambien una obligacion implicando su incumplimiento un "parricidio espiritual". Esta afirmacion la avalaria el obispo con los tantas veces reiterados canchones sobre la ensenanza, añadiendo a ellos en este caso una "Instruccion del S. Oficio" de 24 de noviembre de 1875 por la que se establecia que los padres que no cumplieran lo normado por la Iglesia respecto a la asistencia de sus hijos a escuelas laicas y su formacion cristiana se harian "reos de gravisimo pecado y, en caso de contumacia, indignos de absolucion sacramental", recordatorio que si iba en linea con la actitud que, como veremos, mantendria el obispo de Orense en 1933, contrastaba con la de otros prelados, singularmente, como tambien expondremos, los de Mondoñedo y Santiago y con la evolucion que, tambien en 1933, tendrian los propios metropolitanos.

Por todo ello proponia a sus diocesanos y, en particular a los padres de familia "un programa practico de accion" desglosado en tres puntos, "el primero como objetivo

de nuestras aspiraciones y actuación constante, y los dos restantes de realización inmediata":

"Primero. De no poder obtener la vuelta a la escuela pública confesional, en forma que se salvaguarden eficazmente nuestros derechos religiosos, habra de reclamarse, cuando menos, siempre que la ocasión se ofrezca, con firmeza y tenacidad incansables, la escuela católica para los creyentes, por medio del reparto proporcional del presupuesto de Instrucción Pública o de escuelas libres subvencionadas, al igual que se hace en las naciones mas cultas y verdaderamente libres de Europa; ("") por exigencia inviolable de nuestra conciencia y de la de nuestros hijos, y para que no se de el absurdo de que, con el dinero de una mayoría inmensa de católicos, se sostenga una escuela contraria a sus creencias." ("")

180 En esta petición, "formulada claramente por primera vez de forma individual por un miembro del episcopado, seguía el prelado la postura del Vaticano que ya vimos recogida en la editorial de "El Debate" de 23 de mayo de 1931 y en el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931

181 Reiteraba aquí el obispo la cuestión del sostenimiento de escuelas laicas a cargo de los católicos, ya formulada por "El Debate" en su editorial de 29 de mayo de 1931 y por el Dr. EIJQ Y GARAY en su pastoral de 24 de abril de 1932. En este punto volviera a insistir el periódico citado al analizar el presupuesto que el Estado iba a destinar a la enseñanza en 1933, criticando duramente la asignación destinada a las escuelas israelitas de Tánger (asignación que, según noticia publicada el día 23 de diciembre, fue aprobada en base a razones de política internacional por la necesidad de amparar la cultura hispana de los israelitas amenazada de absorción por Francia), lo que, a juicio del editorialista, no era otra cosa que "el amparo oficial a una confesión religiosa española" contraviniendo lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución, al que se había aludido, precisamente, para negar una "exigua subvención" a los estudiantes católicos (ver la nota núm. 95) y, lo que era más grave, frente a la financiación de la enseñanza de la confesión hebrea, el Estado negaba "todo apoyo financiero a la confesión católica mayoritaria en el país que, dicho sea de paso, ahorra a los caudales de Instrucción Pública con sus escuelas privadas y sus centros secundarios cerca de 200 millones de pesetas anuales...".

"Mas todavía. Persigue a esa enseñanza y amenaza destruirla, sin reparar que responde a un formidable movimiento de opinión confesional y, al propio tiempo, al ejercicio de un sagrado derecho de la mayoría española. El Estado sabe que el 98,3 por ciento de las escuelas privadas son católicas.

«Sabe también que hasta hace un año en que se impuso el laicismo, no había en toda España más que 51 escuelas privadas de carácter laico. ¿Que significa todo esto, sino una manifestación rotunda de millones de ciudadanos españoles que desean educar a sus hijos con arreglo a sus creencias fundamentalmente católicas? Pues he aquí la enorme injusticia. El Estado niega todo apoyo financiero a la enseñanza católica. Lejos de reconocer el apoyo efectivo que a la cultura nacional aporta y el ahorro que a sus presupuestos significa, la persigue y la vela. Y por contra, con el dinero común que tributan en su gran mayoría los ciudadanos católicos, sostiene escuelas laicas contrarias a sus ideas y a sus derechos, al par que con ese mismo dinero y vulnerando la Constitución, favorece las escuelas de la confesión israelita.

«Queremos plantear con toda serenidad el aspecto más hondo del problema. Y puestos en él, partiendo del hecho efectivo del laicismo del Estado, no hay más que una sola posición de equidad y de justicia distributiva. Desde ella, en primer término, es inadmisibile que el Estado niegue su apoyo financiero a las confesiones religiosas. Toda Europa proclama -y así están las Constituciones modernas y los tratados de minorías nacionales- que los Estados laicos no pueden desconocer la religión de sus súbditos. Y como todos son contribuyentes, la neutralidad obliga al Estado a proteger por igual a todas las confesiones. No podrá ser justo el Estado español si no adopta la misma posición jurídica, de verdadera neutralidad y laicismo.

...

«Pero el argumento se agiganta al aplicarlo a la Religión católica, patrimonio no de una exigua e imperceptible minoría, sino de la casi totalidad del país. ¿Por qué no establecer también con relación a ella un reparto proporcional de los presupuestos docentes del Estado? Hemos nombrado el reparto proporcional, ya inscrito en los programas políticos de muchas agrupaciones de derecha, y queremos solo definirlo aquí con las palabras de los políticos franceses: "El dinero del Estado procede del dinero de todos los ciudadanos. Luego debe servir para todos los ciudadanos". Definición tan sencilla y tan llena de justicia, que ninguna conciencia honrada puede dignamente debatir. Pues este principio del reparto proporcional, proclamado por los Prelados españoles en su Pastoral colectiva, no es ninguna utopía en el mundo civilizado".

("Una solución justa", "El Debate", 16 de noviembre de 1932).

Este editorial sería complementado con la noticia publicada el día siguiente dando cuenta de que en el programa de bachillerato del Instituto Hispánicoamericano de Ceuta figuraba incluido una sección de enseñanza del talmud pudiendo los estudiantes que la superarán, ser propuestos por la Alta Comisaría de España en Marruecos a las comunidades israelitas de la zona para ocupar cargos relacionados con la confesión hebrea lo que, a juicio del comentarista, venía a ser una nueva transgresión del artículo 26 de la Constitución. ("El Estado sostiene la enseñanza religiosa... si es judía", "El Debate", 17 de noviembre de 1932).

"He aquí un extremo que creemos debiera ser, también cabeza de programa de todos los jefes, organizaciones o partidos políticos, que aspiren a recoger y representar la opinión y los intereses de los católicos españoles.

"Asimismo, deberá vigilarse porque la escuela pública laica, en la que oficialmente queda terminantemente prohibida toda propaganda política, social, filosófica y religiosa, no degenera en antirreligiosa o sectaria, acudiendo a la protesta y a la denuncia siempre que fuere necesario."

Para la más eficaz consecución de este punto el Dr. Fidel GARCÍA MARTÍNEZ recomendaba la adhesión a "las organizaciones de Padres de Familia".

Como segundo punto y "en tanto que el anterior objetivo no se consiga"- proponía, aparte del envío de los hijos de padres católicos a escuelas en donde se les enseñara según sus creencias, el trabajo por el establecimiento de dichas escuelas donde no las hubiera, aunque fuese a costa del consiguiente sacrificio económico.

Por último consignaba la necesidad de contribuir, ya fuera con limosnas o por medio de ayuda personal, al sostenimiento y fomento de la catequesis parroquial que, "como supletoria de la deficiencia de la enseñanza religiosa de la escuela oficial", establecía desde ese momento en todas las parroquias, reiterando la obligación de los padres de familia católicos de proveer a la formación religiosa de sus hijos.

(162) Utilizaba aquí el obispo los mismos argumentos que el de Palencia, amparándose en lo establecido en la circular de 12 de enero de 1932 para que los católicos defendieran, en base a ella precisamente, sus derechos.

En relacion con este ultimo punto pasaba el prelado a dar las oportunas instrucciones sobre organizacion de las catequesis "al igual que se ha hecho en otras diocesis de España" (clases en dias alternos, horas en que deberian impartirse, materias a enseñar, funciones de los socios de la "Congregacion de la Doctrina Cristiana", cuyo establecimiento en todas las parroquias está preceptuado". catequistas auxiliares, envio de informacion por los parrocos sobre el establecimiento y detalles de las catequesis, etc. etc.). Hacis, ademas, este obispo una ligazon entre el esfuerzo que para los sacerdotes iba a suponer esta nueva funcion, la reduccion del presupuesto de culto y clero y la ayuda economica a prestar por los fieles. Ligazon que, entendemos, solo podia tener por finalidad contribuir a estimular al clero en el trabajo que ahora le asignaba:

"Ciertó que ello habra de suponer para nosotros un aumento de tareas y de sacrificios, precisamente cuando las compensaciones materiales se nos merman hasta anularlas; pero eso mismo será una prueba mas, de que la razon de ser de la vocacion y de la vida sacerdotales trasciende los intereses todos de la tierra... Y aun confiamos que nuestro sacrificio abnegado y patente llegará a ganar el corazon de los fieles, y que estos no dejarán perecer de hambre a los que así laboran por llevar a sus hijos el pan del espíritu..."⁽¹⁶³⁾

A continuacion de esta pastoral el obispo hacia publicar otra escrita por el en 1927 sobre la enseñanza de la doctrina cristiana y en la que habia destacado la importancia de tal formacion y constatado ya que "... la ausencia o estado deficientísimo de dicha instruccion, en muchos bautizados y aun en extensos sectores sociales, (es) el primero de nuestros males y por el que urge empezar el

(163) 29 de septiembre de 1932, "Instruccion pastoral sobre la enseñanza religiosa", BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 7 de octubre de 1932, núm. 13, págs. 209-221.

remedio de estos": por ello reiteraba la obligacion de todo sacerdote de enseñar la doctrina cristiana (enseñanza que quedaba circunscrita a la preparacion para recibir los sacramentos y a la catequesis dominical de niños y adultos), así como, según el derecho canónico, la de los "padres..., abuelos y padrinos, respecto de sus hijos, criados y encomendados", "los maestros y profesores de cualquier clase de escuelas" y la de los ríeles en general, a través de la "Congregacion de la Doctrina Cristiana", de la que "los mejores maestros" deberian ser "los primeros invitados a formar parte de ella".

Si el motivo que daba el prelado para publicar ahora esta pastoral de 1927 era que lo hacia "para recordacion de esas disposiciones (las generales del Derecho Canónico y las particulares de la diócesis sobre catequesis dominical) y a fin de dar reunido todo lo referente a enseñanza catequística", no cabe duda que el seguir aludiendo ahora a la actuacion de los maestros era una llamada de atencion implícita, tanto para recordar las normas de la Iglesia sobre lo que debia ser la practica en toda clase de escuelas, como para que los maestros católicos no olvidaran, por las nuevas disposiciones gubernamentales, lo que aquella les imponia."**

La carta pastoral que el 14 de octubre escribiera el Dr. Isidro GOMA y IOMAS, obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela fue, sin duda alguna y como era costumbre en el estilo del que luego seria primado de España, la mas extensa del periodo, representando a lo largo de sus cincuenta y tres paginas un pequeño tratado doctrinal.

(164) "De la Carta Pastoral sobre enseñanza de la Doctrina Cristiana de 19 de marzo de 1927", *Ibid.*, págs. 221-229.

nal sobre el laicismo oficial en la enseñanza estatal. (**)

Dividida el Dr. GOMÁ su alocución en nueve epígrafes: "Situación que la revolución nos ha creado: La escuela; La educación laica es grave mal; Laicismo y cristianos; ¿Laicismo o impiedad?; Laicismo y moral; Educación y laicismo; La Iglesia es libre para enseñar la verdad; La Iglesia no puede dejar de enseñarla; La Iglesia y sus colaboradores; la familia, Acción católica y otras instituciones, sacerdotes y religiosos" y, como se ve por el título del primero de ellos, el juicio de valor del obispo sobre el régimen republicano no podía tener mayor claridad. Para el su instauración equivalía, ni más ni menos, que a una "revolución", revolución a la que achacaba, no sin razón, los ataques y pérdida de privilegios de la Iglesia española, y a los que calificaba, en lo que parece impropia definición para una institución como la eclesial, de "sistema de defensas":

(165) Es más que probable que para la redacción de esta pastoral y, sobre todo, para el oportuno análisis y dictado de los mandatos que, sobre la implantación y desarrollo de las catequesis, contenía, se basara el Dr. GOMÁ en las ideas aportadas en las reuniones que en días distintos del mes de mayo mantuvo con los arciprestes de Tarazona y de Tudela para tratar el tema del apostolado en la diócesis (entre las cuestiones abordadas figuraban, aparte de la "ampliación de la cultura popular religiosa, por cursillos de Religión, Conferencias, Círculos de Estudios y actos públicos de afirmación católica" y "la intensificación de las catequesis parroquiales" para niños y adultos, los de "organización de sindicatos de diversos oficios de ambos sexos" y "medios y modos de acrecentar las suscripciones económicas pro Culto y Clero"), (10 y 12 de mayo de 1932, "Reunión de Sres. Arciprestes", BDE de Tarazona y Tudela, año 70, 27 de mayo de 1932, págs. 358-360). Igualmente el Dr. GOMÁ debió basarse en los datos remitidos por los párrocos -según solicitud efectuada por "La Comisión Diocesana para el fomento de los Catecismos" en el mes de agosto- sobre el estado de sus catequesis; datos que se referían expresamente al: número de niños y niñas obligados a asistir a la catequesis; número de los que realmente asistían y medios puestos en práctica "para suplir, ante el laicismo oficial, la enseñanza religiosa que se daba en las escuelas", (s.f., "Ruego", BDE de Tarazona y Tudela, año 70, 15 de agosto de 1932, num. 713, págs. 528-529).

"Desde hace mas de un año la situación legal de la Iglesia en España ha sufrido radicalísimo cambio. Como riada que asola nuestras vegas, la ola de la revolución ha derribado, una a una, las posiciones ventajosas que nuestra religión había conquistado a fuerza de siglos en el concierto de las instituciones sociales patrias. No solo en la Constitución fundamental del Estado español se ha negado todo derecho y lugar a la religión católica que profesan la mayoría de los españoles, sino que, con la piqueta demoledora de leyes complementarias, se ha destruido ya gran parte del sistema de defensas que en el orden social tenía la Iglesia. Desgraciadamente parece que aun no se ha llegado al fin."

Entre todos los males inilíngidos a la Iglesia ninguno era, no obstante, comparable a la prohibición de la enseñanza religiosa en la escuela:

"Pero entre los daños enormes que se nos han causado -confiscación de bienes, laicización de cementerios, legislación sobre matrimonio y divorcio, etc.- ninguno comparable a la proscripción de Jesucristo y de su doctrina santísima de las escuelas nacionales. A título de aconfesionalismo y de laicismo estatal, se ha estrangulado la corriente del pensamiento y de la vida cotidiana por el mismo sitio y en los mismos órganos por donde se introduce toda vida espiritual en la sociedad: la niñez y la juventud, la escuela y el magisterio."

El prelado no creía, sin embargo, que el pueblo español pudiera dejarse iniluir por el laicismo y pensaba que pasarían muchos años antes de que lograran cambiarse sus costumbres católicas "en los actos capitales de la vida". Lo cual no era igualmente aplicable a la institución escolar:

"En este taller de hombres, la cantera de donde se extraen los ciudadanos. Puesta la escuela -y lo mismo decimos de los centros de cultura superior,- bajo el dominio, mas que tutela, del Estado laico y de legisladores laicos, funcionará según la técnica laica y dará en su día hombres laicos. Cuanto pueda interponerse entre el legislador y el niño, maestros, pedagogía, material, etc., el Estado lo eliminará paulatinamente si no se adapta

y lo sustituirá por un instrumental, -abarcando con esta palabra todo factor de formación escolar- absolutamente homogéneo con el pensamiento laicizante de quienes mandan. Es esto no sólo conforme con el concepto de la soberanía absoluta de los Estados modernos, sino que, en el hecho y en nuestra patria, se ha trazado, autorizada y públicamente, la trayectoria legal."

De ahí, que ante tal panorama, fuera preciso "tomar nuestras posiciones", aunque haciéndolo siempre "dentro de la más acendrada legalidad" puesto que "nosotros no debemos, ni podemos, adoptar actitudes de rebeldía"; sin embargo, "dentro de nuestro derecho... venimos obligados a reparar los daños que la ley haya podido inferirnos y a suplir sus lagunas en cosa que atañe a lo más fundamental de la vida: la formación religiosa...".

Esto era, además urgente, y para demostrar esa urgencia ponía el Dr. GOMÁ como ejemplo lo sucedido en la vecina Francia, donde, al no acudir los católicos con la debida prontitud a paliar los estragos de la implantación de la escuela oficial, se formó una generación laica, por lo que al querer crear ahora escuelas libres, católicas, la mayor dificultad la ofrecían los miembros de aquella generación. Había que evitar, por tanto, que en España pudiera pasar igual, poniendo el remedio oportuno y cuidando la formación religiosa de los niños y de la juventud.

Tras estas consideraciones describía el prelado los males que comportaba la formación laica, incluso desde el exclusivo punto de vista del cuerpo social, ya que solo la religión, connatural al hombre, podía inbuir al individuo los necesarios ideales hacia el bien:

"Toda la sociedad ordenada es una jerarquía de obediencias: la obediencia es una voluntad que se doblega ante la ley o ante la voluntad que propone o se impone en nombre de la misma ley. El laicismo es carcoma de la autoridad, porque suprime la

razon ultima de toda autoridad y de toda ley, que es la suprema autoridad de Dios."

Frente a este axioma nada tenian que hacer las meras sanciones humanas, que no penetraban en la conciencia del hombre, siendo para el prelado un "hipocrita" todo aquel que cumpla con las normas sociales en funcion de ellas mismas pues fingia la realizacion de actos buenos solo para beneficiarse. Estas normas, ademas, no se preocupaban, a juicio del Dr. GOMA, de encarrilar a la juventud hacia el recto uso de los sentidos, "de ahi la precocidad del vicio, que hoy nos espanta; de aqui el ansia insana del placer".

La religion, por otra parte, "no solo es un sistema de verdades, preceptos y practicas: es una verdadera tradicion que ha ido acumulando fuerza educadora a medida que ha ido actuando sobre las generaciones creyentes". por ello, en linea con lo que UNAMUNO habia dicho en su articulo de 29 de enero de 1932 se preguntara "¿Que cosa podra inventar el laicismo para sustituir esos valores espirituales de tradicion?".

Por ello la supresion de la religion entrañaba un gran peligro ya que, pese a lo que antes habia afirmado sobre el tiempo que era necesario que transcurriera para que cambiaran ciertas costumbres catolicas de caracter externo, no parecia suceder lo mismo respecto a la ideologia interna de los que hasta hacia poco (o aun ahora, reducidos a aquellas costumbres externas) se consideraban fieles cristianos y, asi, constataba el Dr. GOMA:

"En pocos meses hemos podido ver el estrago producido por la idea de que oficialmente "se ha suprimido a Dios". Nuestro pueblo es generalmente tan sencillo como inculto: carece de otro ideal levantado que no sea el religioso; no tiene, sobre todo en nuestras pequenas ciudades y lugarejos, un derivativo hacia donde se encauce este apetito de cosas espirituales que tenemos innato. Al suprimirse la necesidad de Dios "porque la

autoridad lo manda", se han desatado las fuerzas bajas de la vida y ha venido una relajación del sentido moral y hasta de la misma civilidad, y hemos tenido que presenciar espectáculos que abochornan. En verdad que cuando los hombres se desprenden de Dios caen de muy alto."

La educación laica sería, además, una "aberración... en un país profundamente cristiano como el nuestro", puesto que la religión que siempre había profesado era la verdadera que lo unía a Dios, siendo el laicismo su negación al ser -"sobre todo en nuestro país"- "mas que la abstención de la religión, una forma de irreligión e impiedad, mas o menos cruda o violenta, según el temperamento del hombre que se dice laico". "Se nos asegura -dira para corroborar tal afirmación- que en una escuela el maestro obliga a los niños a cantar a compas '¡Dios no existe, Dios no existe!' y añadir: "Digamos de paso que esta, mas que escuela, es antro: de él, si prevalece en el alma del niño el ateísmo del maestro, saldrán lobeznos para la sociedad".(16)

Por otra parte destacaría el obispo, sin entrar en el análisis de la concatenación entre lo que anteriormente ha indicado sobre el súbito ateísmo ideológico del pueblo y lo que ahora va a decir, como si de hechos fortuitos se tratara, que "desgraciadamente... ha coincidido en nuestro

(16) Es curioso que estos calificativos del obispo, y aun los más contundentes de "fieras y salvajes" que el 21 de mayo había hecho el Dr. VILA MARTINEZ o la referencia a los "instintos de bestia", hecha en 1931 por el Dr. MORENO no repercutieran réplica alguna cuando, contrariamente, los católicos seculares eran más vulnerables, según parece, a las iras de, al menos, las autoridades provinciales, como se deduce de la noticia publicada en "El Sol" trece días antes de que se diera a conocer esta pastoral y, según la cual, el gobernador de Mallorca había puesto una "fuerte multa" (2,500 pts.) al editor de la hoja "Acción cristiana" "porque en una de ellas se dirigen ataques contra la República y dice que la enseñanza laica hace niños salvajes y es enseñanza de criminales" opinión esta que, si no tan contundentemente, vemos ampliamente utilizada en los documentos de la jerarquía.

para la explosión doctrinal y legal del laicismo con una guerra encarnizada contra nuestras instituciones cristianas", esta coincidencia hará que, a su juicio, "la historia de España en este periodo será algo vergonzoso para la generación presente", siendo incomprensible en el extranjero -como decía haber constatado- "esta proyección social de la impiedad", que se daba claramente desde el mismo poder político, con una legislación que representaba "una serie de ataques en regla a la vida religiosa y a las instituciones cristianas del país", y todo ello porque "el laicismo no es tolerante ni neutral... en el hecho concreto de la historia se ha traducido en ariete destructor de nuestra santa religión", lo que le convertía en "el mas fuerte corrosivo de los principios en que descansa la vida moral del hombre".

"... un sistema arreligioso en teoria como el laicismo, arreligioso e impio en la practica, es totalmente amoral en teoria e immoral en el hecho de la vida individual o colectiva. Ciertó que tambien se ha hablado de una moral laica: recientemente hemos oido a predicadores laicos hablar de ideales de trabajo, de solidaridad, de respeto social, como síntesis de las aspiraciones de escuela o de partido político o de las pedagogías que les sirven de instrumento. Pero desallamos a quienquiera que sea a que nos presente un santoral laico, o a que nos señale en la historia un periodo o un pueblo donde se haya prescindido de la religion como fundamento de la moral y no haya triunfado la animalidad con todos sus terrores.

...

"¿Será el ideal social, es decir, el incesante progreso de la colectividad, el que dicte la ley de nuestra vida?. Pero la sociedad y su progreso son algo movíl y variable; ni sabemos del fin ni de la ruta de las sociedades en el futuro de la historia; ni son las sociedades el fin último de los individuos, que tienen destinos absolutamente personales; ni hay quien pueda concretar las exigencias morales de la sociedad en un punto de la tierra o de la historia, con autoridad para imponerlas si no le viene de Dios; ni siquiera es

el bien social motivo capaz de vencer los motivos de la conveniencia personal de los individuos.

...

«Si no hay Dios ni religion, es pusilanimidad o necesidad el ser honrado; para lo que pueda exigir la sociedad, bastara con parecerlo.»

Claro que, dira el Dr. GOMA, contradiciendo sus afirmaciones anteriores respecto a lo sucedido en Francia y su constatacion del nacimiento de la "impietad social" en España, que la obra del laicismo necesitara siglos para llegar a la "perdida paulatina del patrimonio de la fe y de virtudes que el tiempo y los esfuerzos de las generaciones nos legaron", mas suponiendo que esto pudiera pasar, implicaria la creacion de una sociedad sin freno moral alguno.

La religion era lo unico que garantizaba la formacion integral del hombre, y no solo en un sentido trascendental, sino incluso simplemente natural o convencional, porque solo ella daba los verdaderos conceptos de "dignidad y fuerza personal", siendo el Evangelio "la carta magna de los derechos del hombre", que senalaba sus verdaderos fines, y la religion la verdadera creadora de las ideas de "libertad", "igualdad" y "fraternidad" que, en el orden social, representaban el "valor personal y la perfeccion social de los pueblos modernos", y la unica que hacia que el hombre fuera un ser perfecto en su dimension convivencial.

"Y esto, todo esto, es lo que el laicismo suprime en la educacion de nuestras juventudes... y en nombre del laicismo se persigue como carcinoma de caracteres y roña de los tiempos modernos.

...

No creemos que nadie reniegue de la historia de su patria: los pueblos son hijos de ella; las razas son tales cuales sus progenitores las hicieron. Y los nuestros fueron catolicos, en catolico trabajaron, tanto mas que ningun otro

pueblo del mundo, y de ellos salió esta España de nuestros amores: católica, apostólica, romana, a pesar de todas las debilidades y eclipses de nuestra vieja fe, que coinciden con los eclipses de nuestras glorias. Eliminar el Evangelio de nuestra formación sería desfigurarla y lanzarnos por caminos que nuestros padres no trillaron.

"Es razón de patriotismo que hemos querido insinuar al abocetar la descripción de los daños del laicismo."

Como se ve, el Dr. GOMA quería dejar bien claros, quizá casi más que los espirituales, los beneficios temporales de la religión y lo que su práctica podía favorecer a España: el remedio para evitar la peligrosa senda en que la patria se podía introducir no sería otro que el de la catequesis, de ahí que ante el laicismo, la actuación de los católicos debería estar basada en el siguiente "principio":

"El Estado español se ha declarado oficialmente laico y ha promulgado una legislación laica, poderoso instrumento para laicizar la nación. Nosotros, respetando la ley por razón de fuerza mayor, pero convencidos, aunque no fuese más que por razones de filosofía y pedagogía, de que el laicismo es mal gravísimo de la religión y de la patria, dentro la ley, y en uso de todos los derechos que se nos concedan, hemos de esforzarnos en neutralizarlo, metiendo todos y por todo medio a nuestro alcance, la religión en todo sitio que nos sea accesible."

Y ello porque "la Iglesia es libre para enseñar la verdad", no habiendo poder humano que pudiera impedirle el ejercicio de tal libertad no solo en cuanto atañía a su credo sino en todos los ordenes de la vida ya que "la verdad divina se roza con todas las cosas humanas" y "todo lo temporal puede tener y tiene en el hecho de la vida, un aspecto de eternidad". "Por esto la Iglesia, desde sus comienzos... ha venido aplicando los puros principios sobrenaturales a la compleja casuística de la vida".

"Difícilmente hallaríamos una cuestión de ética, de política, sobre la familia y la sociedad, el trabajo, el lujo y las riquezas, la propiedad, la armonía de clases, que no tenga un esbozo doctrinal en el Evangelio y en los Escritos Apostólicos. No tardó más de tres siglos la Iglesia en poder desplegarse, al suave calor de la paz y en el campo de la libertad, con un cuerpo de enseñanzas divinas y divino-humanas que seran la base de la civilización europea.

«Y esto es un título a la libertad doctrinal que debe disrutar la Iglesia; título de gratitud y de justicia que nadie ha desconocido hasta estos últimos tiempos, cuando se intenta desviar la corriente del progreso cristiano por cauces desconocidos. Empeño temerario, porque Dios castiga terriblemente a los pueblos que le repudian.

...

"Los estados laicos, los legisladores laicos han sido con la Iglesia ingratos; ante el pueblo han deformado la verdad histórica, acusándola de enemiga del saber humano; y al vocear una cultura nueva que ha servido de cobertura para repudiar el magisterio de la Iglesia y de los eclesiásticos -de "engañifa" la ha calificado un sabio bien poco sospechoso- no han hecho más que atentar contra los derechos de la mas clara y sagrada de las libertades, restar a la verdadera cultura trabajadores beneméritos y producir un eclipse -ficc quiera que momentáneo- en la carrera brillantísima del magisterio eclesiástico."

Frente a ello la Iglesia no solo era libre para enseñar, sino que tenia, según le encargo su fundador, la obligación de hacerlo por si y por medio de los colaboradores de los obispos y sacerdotes que, con el papa, formaban la "Iglesia ministerial y magistral" a que habia venido refiriéndose; a estos colaboradores "incumbe el derecho y el deber, en la medida según la que los Jerarcas se los conlieren, de la función catequística", y ya que "fuera del ministerio propiamente sacerdotal y jerárquico, quedas la familia y el Estado" y que "El Estado, nuestro

Estado al menos, se inhibe en cuestión de catequesis: es laico, sus escuelas oficiales son laicas. Nada podemos hacer más que pedir a Dios toque el corazón de nuestros gobernantes para que, volviendo sobre su acuerdo, consientan, impongan el magisterio de la verdad religiosa", quedando, mientras tanto, como "sociedad natural", la familia, a la cual toca cumplir con "el deber fundamental de la formación religiosa de sus hijos".

"El maestro de las escuelas oficiales había sido hasta ahora vuestro colaborador en la obra de catequizar a vuestros hijos. Nos habíamos comprobado el celo y la competencia con que los maestros de estas tierras los instruían y educaban en la religión y moral cristianas. Ahora no pueden; la ley se lo prohíbe. Os quedáis solos con la Iglesia en la grande obra. Mandad a vuestros hijos, con asiduidad, con imperio, con sanciones, a los catecismos parroquiales o particulares. Pero, sobre todo, porque vuestra función educadora es insustituible, catequizadlos personalmente."

Y ello porque, entre otras razones, "si os hacen a vuestros hijos arreligiosos o irreligiosos, en vano requerireis de ellos respeto y obediencia, y os amargarán la vida con sus vicios, tal vez con sus crímenes"

"Tenemos por seguro, amados diocesanos, que si en las familias, colaborando con la Iglesia, se hiciese obra de educación religiosa, el laicismo de la escuela, y hasta el del Estado, no tocarían con su baba corrosiva el alma de nuestra sociedad. Los hijos son vuestros; en vuestras manos está el porvenir del pueblo. El alma de las razas tiene sus raíces en la familia."

Más fuera de la familia estaría, entroncada con ella e íntimamente ligada con la Iglesia, la Acción Católica, por la que deberían constituirse "asociaciones de seglares de ambos sexos para la grande obra de la catequización de nuestros pueblos", la cual era tanto más necesaria por tener ya el Estado la vista puesta en las congregaciones religiosas "que se verán privadas de un oficio para el que

muchas de ellas fueron principalmente instituidas". Cuando este golpe se produjera seria "rudísimo para la formación religiosa de las juventudes. Es el empeño máximo en la des cristianización de España, porque todavía, sobre todo en las ciudades, tienen más educandos las Congregaciones que el Estado".

"La responsabilidad de recibir y administrar la herencia de las Congregaciones, que mueren a lo menos en su función educadora, caera sobre nosotros. Para sustituirlas en lo posible hay que organizar una vasta red de obras católicas de todas clases: patronatos, escuelas parroquiales, oratorios, escuelas dominicales, nocturnas, asociaciones de juventudes de ambos sexos, círculos de estudio, sindicatos católicos; todo aquello, en fin, que según las posibilidades de cada lugar, pueda ser un auxiliar de la Iglesia en la obra de catequesis popular."

Al no ser posible realizar todo ello en todas partes, sugeriría, que, donde fuera factible, se emprendieran las siguientes actividades: "Preparación de cursillos de religión, en sustitución de los suprimidos por el Estado; organización de jóvenes católicos que, destacándose los días festivos de los núcleos importantes de población, se dedicasen a explicar a otras agrupaciones de los pueblos la doctrina cristiana, acomodándose a la instrucción y capacidad de los oyentes; fundación de pequeñas bibliotecas parroquiales, y en instituciones particulares, con fondo exclusivamente religioso y moral, que podría nutrirse de donativos y pequeñas compras y obsequios editoriales a base de propaganda...; intensificación, en las agrupaciones de Acción católica, o simplemente católicas, de la formación religiosa de sus individuos...; propaganda, en forma de mayor vulgarización posible, de la naturaleza y daños del laicismo, especialmente en la escuela; del deber civil y político de combatirlos; de la responsabilidad de la representación popular en los comicios; de la injusticia que representa el que los católicos deban sostener las escuelas

laicas, "" de la proporcionalidad entre la tributacion de los catolicos y sus escuelas, conforme a la practica de los paises mas cultos; de los deberes gravisimos de los padres de familia en este punto; de la trascendencia de los problemas de orden moral, social y hasta economicos que latan en el fondo de las tendencias politicas del laicismo"

Tras señalar estas actuaciones el Dr. GOMA haria una llamada a la colaboracion que "sin faltar a la ley ni a su deber" podrian prestar muchos maestros ("los tenemos profundamente catolicos" -dira- y "muchos de ellos deploran la enorme desgracia de sus escuelas sin Dios"); no obstante no llegaria a precisar los extremos de tal colaboracion.

Seguidamente, dirigiéndose a sacerdotes y religiosos, indicaria que "la ignorancia religiosa de nuestro pueblo es cosa que espanta" y ello era asi aun habiendo existido catequesis en escuelas y colegios, por lo que el esfuerzo a realizar al desaparecer aquella era urgente y necesario, aunque fuera duro "cuando se nos arrebatara el misero pan que recibiamos y que la justicia habia puesto en nuestras manos"; pero debian de pensar "que la palabra 'catequesis' la uso el Apostol por primera vez para indicar el derecho del que catequiza a los bienes del catequizado", expresiones que no solo hacian referencia -como ya hemos visto que tambien acababa de hacer el obispo de Calaborra- a la supresion del presupuesto del culto y clero, sino, tambien, dando un paso mas que este prelado, al derecho del sacerdote a ser sostenido con las aportaciones de los fieles en virtud de las funciones que para ellos realizaba. El Dr. GOMA, no obstante, no desarrollaria las consecuencias practicas de este derecho.

(167) Como vemos este tipo de argumentos de justicia distributiva va a ser cada vez mas reiterado por la jerarquia como medio de hacer ver la verdadera situacion a los catolicos (ver las notas 160 y 161).

A continuación, y por último, dictaría una serie de normas, que calificaba expresamente de "mandatos", relativas a la colaboración de los sacerdotes y de los religiosos y religiosas en el catecismo, días de catequesis semanales, horario, auxilio de catequistas seculares de ambos sexos, directrices sobre la forma de impartir las clases y textos a utilizar, información a rendir al obispado e instauración de un "Secretariado para los Catecismos" en cada diócesis, cuya misión sería el estudio de las dificultades que aparecieran en el desarrollo del plan que acababa de establecer y la propuesta de las iniciativas pertinentes, así como la resolución de cuantas dudas se suscitaran en las catequesis y el proveer a estas de medios materiales.⁽⁶⁶⁾

También el Dr. MUGICA suscribiría el 8 de octubre una extensa pastoral sobre la enseñanza religiosa en la que comenzaba criticando las teorías sobre la escuela laica y las posturas que defendían que su implantación no era un atentado contra la religión, toda vez que nada impedía a los padres educar cristianamente a sus hijos en el seno del hogar; frente a ello constataba el obispo que "la mayor parte de los padres no pueden instruir y educar a sus hijos como quisieran, o por falta de competencia cultural o porque, casi siempre, las necesidades de la vida les obligan a ganar el sustento para su familia, fuera de su hogar", constatación que sí podría ser acertada en su primera formulación respecto a un amplio espectro social, olvidaba en la segunda el papel de la mujer en aquella época y la es-

(66) 14 de octubre de 1932, "Carta pastoral: Catecismo y catequesis", BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 15 de octubre de 1932, núm. 717, págs. 623-676.

casa incidencia de su presencia en el mundo laboral, "..." siendo las madres, por otra parte y como hemos visto recogido en alusiones contenidas en otros escritos del episcopado, las que tenían asignado con carácter general el cuidado y formación familiar de los hijos. No obstante, en base a sus argumentos señalaría el obispo que los padres "envían a sus hijos al maestro, los envían a la escuela y es allí donde se ilustran las inteligencias de los niños y se forman sus corazones", razón por la que las escuelas no podían ser neutrales al no ser nunca neutral un maestro en materia de enseñanza, lo que hacía que "la escuela sin Dios, es escuela contra Dios".

Citando frases del evangelio, palabras de Pío IX y Pío XI y de los prelados franceses, patentizaría el Dr. MÚGICA como la escuela neutra o laica era condenada por la Iglesia, razón por la que "es preciso que se ataque el mal con remedios urgentes y eficaces, con creación de escuelas católicas, para instruir y educar cristianamente en ellas a la niñez y a la juventud", obligación que en primer lugar compete a la familia, que "tiene inmediatamente del creador la misión y por tanto el derecho de educar a la prole, derecho inalienable por estar inseparablemente unido con la estricta obligación, derecho anterior a cualquier derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mismo inviolable por parte de toda potestad terrena" y derecho que, por último, también atañía a la Iglesia en cuanto a sus fieles, al estar revestida de la potestad de enseñar que le dio su fundador y al ser una sociedad de orden sobrenatural,

(15) Ver en este sentido el libro de Rosa M^a Capel, *El sufragio femenino en la 2^a república española*, Granada, 1975, págs. 105 y ss.

universal y perfecta, razones, todas ellas, en las que se apoyaban las disposiciones canónicas en materia de educación que reseñaba¹¹⁷⁰ y algunas de las cuales no hemos visto citadas hasta este momento, y que le servirían de base para justificar al "Reglamento para la creación y funcionamiento de las escuelas católicas".

Estos derechos de la Iglesia no implicaban la negación de los que tenía el Estado, mas el deber de este, según Pío XI, era el de proveer a la libertad de la enseñanza por la implantación de subsidios proporcionales, no debiendo, en todo caso, la potestad civil impedir la apertura de escuelas por los católicos, aunque, conculcando la justicia distributiva, tuvieran que mantenerlas a sus exclusivas expensas. A ello respondía la visita que, según comentaba, había recibido de los comisionados de la "Asociación Católica de Padres de Familia" de Bilbao, San Sebastián y Vitoria para tratar el tema de las escuelas católicas, tema que, según sabía, estaba siendo abordado por otras entidades. Bendiciría el obispo todas estas iniciativas y para mejor proveerlas crearía una "Comisión diocesana" que se ocuparía "de todo lo referente a Escuelas Católicas, administrará los donativos que para ese fin recibiere y resolverá todas las cuestiones pertinentes a ese ramo de enseñanza".

(1170) "La Iglesia tiene derecho de fundar escuelas de toda clase de disciplina, no sólo elementales, sino de segunda enseñanza y superiores (can. 1371)".

"La educación religiosa de la juventud en las escuelas está sometida a la inspección y autoridad de la Iglesia.- Es deber y derecho de los Prelados el vigilar para que en las escuelas de su jurisdicción nada se enseñe, ni se haga contra la fe y buenas costumbres.- A ellos también compete de derecho, el aprobar los libros y los maestros de religión, como el exigir que, por causa de religión y de costumbres, se destierren los libros y se separe a los maestros (can. 1381, 1, 2 y 3)".

Ahora bien el prelado queria que las escuelas que se fundasen fueran parroquiales: "Una escuela catolica al lado de cada campanario." He ahí nuestro ideal".

La razon que el obispo daba para una tal adscripcion era que solo tales escuelas podrian garantizar la necesaria neutralidad politica:

"La parroquia es la patria espiritual de las almas, y en la parroquia se congregan los catolicos, sean cuales fueren sus opiniones politicas... ¿no es justo y necesario para lograr la paz espiritual, tan perturbada en Nuestra diocesis en todos los sectores, que siquiera los niños y los jovencitos aprendan las primeras letras y la religion sin animosidades politicas? Y no es evidente que sera la escuela parroquial la que ha de ofrecer garantías de neutralidad politica y la que menos recelos pueda despertar de parte de los que solo buscan la instruccion y educacion catolica de sus hijos?..."

Hasta linea era, precisamente, la preconizada por Pio XI¹¹⁷¹ de ahí que, si al crear escuelas catolicas "se hace obra politica de partido"¹¹⁷² en cualquier sentido que se quiera tomar, mucho tememos que ni podamos crear tantas escuelas como serian necesarias, ni los fieles todos¹¹⁷³ contribuyan a las colectas pro scholis, por crear algunos que sus donativos van a sostener escuelas del sector contrario, o por comprender que sus propios donativos no pueden ni crear, ni sostener escuelas catolicas de su gusto".

(1171) En bastardilla en el original.

(1172) Linea que, por otra parte ya hemos visto resaltada, aunque no con la finalidad perseguida por el Dr. MUGICA, por otros miembros del episcopado y en el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931: "Así que, al prorurar la escuela catolica para sus hijos, sea proclamado bien alto y de todos sea bien entendido y reconocido que los catolicos de cualquier nacion del mundo no hacen obra politica de partido, sino obra religiosa indispensable a la conciencia..."

(1173) En bastardilla en el original.

Pero si por cualquier causa no se pudieran crear estas escuelas parroquiales, el aceptaria "todas las que se ajusten a las normas que la Iglesia prescribe para escuelas catolicas", debiendo considerar los rielees, finalmente, que "a la hora presente la Obra de las Escuelas Catolicas es la Obra por excelencia, que procurar a los niños una educacion cristiana es la mas grande y la mejor de todas las caridades" y que, en consecuencia, todos debian contribuir al éxito de esta empresa.'''

A continuacion de esta pastoral publicaba el obispo el "Reglamento para la creacion y funcionamiento de las escuelas catolicas" que, segun se senalaba, era, con ligeras variaciones, como el publicado por el arzobispo de Auch para su archidiócesis. En él, aparte de crear la "Comision diocesana" para el establecimiento de nuevas escuelas catolicas, vigilancia de su funcionamiento, proteccion del personal docente y resolucion de dudas, se fijaban una serie de medidas tendentes a un total control eclesiastico de la ensenanza catolica, tales como la prohibición de apertura o cierre de escuelas sin autorizacion diocesana -que tambien era requerida para el nombramiento de maestros y eleccion de libros-, el nombramiento de un inspector en cada una de las provincias de la diocesis encargado de velar por la ejecucion del Reglamento, la organizacion de los exámenes, etc. etc.'''

El Dr. IRASTORZA LUINAZ, obispo de Urinuela, tambien escribira el 10 de octubre una amplia pastoral estructu-

(174) 8 de octubre de 1932, "Exhortación Pastoral sobre las Escuelas Catolicas", BOE de Vitoria, año 68, 25 de octubre de 1932, número extraordinario, págs. 537-550.

(175) 9 de octubre de 1932, Ibid. págs. 551 y ss.

rada en dos grandes bloques, uno ("Introducción") de análisis de los hechos relacionados con el laicismo en la enseñanza y otro ("Mandamiento episcopal") de diseño de la organización de la enseñanza católica en la diócesis. El primero se desglosaba, a su vez, en los siguientes epígrafes: "Importancia trascendental de la formación religiosa de la juventud en la hora actual"; "La preocupación preterente del apostolado de Jesucristo: El primordial y perenne ministerio de la Iglesia"; "El gran deber contemporáneo ante la conspiración del ateísmo internacional y las orientaciones laicistas"; "Condiciones de eficiencia de la función educativa cristiana: Instrucción progresiva a base evangelica y liturgica y profunda formación eucaristica". El segundo, subtitulado "normas prácticas para la formación cristiana de la juventud", aborda los siguientes temas: "De las escuelas de religión y personas docente" (De las escuelas parroquiales de Religión; Misa catequística dominical; Personal docente eclesiástico; Catequistas voluntarios y Cofradía de la Doctrina Cristiana; Censo de escolaridad y Libro de la Doctrina; Centros rurales); "Organización de la enseñanza" (Enseñanza graduada y ciclica; Metodo historico; Programas y texto de enseñanza; Duración del curso; Obligatoriedad, Disciplina de la Primera Comunión); "De las escuelas y colegios católicos" (Condiciones para ostentar este caracter; La intervención sacerdotal; La asistencia a la Vida Catequística Parroquial; La Primera Comunión en los Colegios de Religiosos); "Instituciones complementarias" (Cursos superiores de Religión; Patronatos y Oratorios festivos interparroquiales; El Catecismo de adultos; Asociaciones de Padres de familia; Monición al principio de cada curso).

Comenzaba el Dr. TRASTORZA señalando su preocupación por la formación religiosa y las razones de tal preocupación:

"Entre las graves preocupaciones pastorales que Nos embargan en la hora presente, ninguna más trascendental que la de asegurar y garantizar suficientemente la instrucción y formación religiosa de la niñez y de la juventud. La suerte de las generaciones venideras, temporal y eterna, y la orientación que haya de prevalecer en adelante en la vida de la Patria, depende principalmente de que sepamos cumplir, superando las dificultades actuales, este deber primordial y básico de todo apostolado cristiano..."

La causa de su inquietud venia, a la vez, marcada por la confirmación que hacia, como hemos visto ya en otros prelados, de los estragos causados entre los fieles por las nuevas propagandas políticas, señal inequívoca de la falta de una suficiente formación religiosa:

"La misma facilidad con que se ha desviado a una porción considerable, sobre todo de las clases populares, víctimas hoy de propagandas subversivas y anarquizantes, la prontitud con que el enemigo de las almas ha sembrado la cizaña y se ha extendido en el campo cristiano (no nos está diciendo que no estaba debidamente cultivada, ni suficientemente arraigada la simiente evangelica)."

Al haberse introducido ahora la enseñanza laica en las escuelas públicas y al no formarse, consiguientemente, los niños y jóvenes en la religión, existía un "grave riesgo de los más sagrados intereses de la familia, de la Religión y de la Patria"; de ahí que, al prohibirse a los maestros enseñar la doctrina como se había hecho secularmente, "se impone más que nunca su enseñanza en el hogar familiar" y en la parroquia, y ello porque la sustitución de la idea de Dios por una serie de conceptos sociales era imposible, ya que "el honor, el deber, la abnegación, la verdad, la patria, la familia, el amor..." no pueden responder a las eternas verdades de la tierra, "Si el cielo está vacío, si nada hay sobre nuestras cabezas, se comprenden lógicamente las imposiciones trágicas del anarquismo de destrucción social".

Por todo ello y siguiendo lo que ya ordenara para la capital de la diócesis el ocho de abril, pasara el obispo a dictar las normas por las que habrían de guiarse las escuelas de doctrina cristiana, estableciéndolas en todas las parroquias de la diócesis (duración, horario, colaboración de sacerdotes y catequistas auxiliares, creación de un núcleo llamado "Celadores de obra", cuya misión sería promover la asistencia de los niños a la catequesis "poniéndose en contacto con las familias cristianas, estimular la cooperación económica y organizar un Ropero Catequístico para los niños necesitados", etc.). Segundamente, y en base a las mismas razones expuestas al principio de la pastoral, el prelado pasaria a establecer las disposiciones que, con carácter general, debían informar la organización de estas enseñanzas, tratando así de la forma en que habían de impartirse, duración de los cursos, obligatoriedad de sus distintos grados, así como las que debían regir el funcionamiento de las escuelas y colegios católicos (prohibición de su apertura sin autorización episcopal, a la que debería someterse igualmente el programa y nombre del maestro que impartiera la religión, etc.).

(176) El Dr. IRASTORZA, bas en línea con las disposiciones del Derecho canónico, daba unas normas menos estrictas que las del Dr. MUGICA, al referirse únicamente a los programas y nombres de los maestros de religión y no a los de otras materias como parece deducirse del reglamento dictado por este.

Es curioso que, pese a la mayor distancia que los separaba y quizá menor relevancia de la pastoral del de Orduña comparandola con la anteriormente publicada por el Dr. GOMA, el boletín eclesiástico de la diócesis de Palencia aludiera a aquella para destacar y alabar su contenido. Junto a esta noticia incluía en el mismo número la relativa a un plan de conjunto presentado por las Juntas parroquiales para la educación religiosa en Madrid y al caso (a) que ya había aludido en el núm. 22 de 15 de noviembre) de la destitución de un sacerdote que había sido nombrado director del Instituto de Torrelavega. Finalmente, volviamo a tratar el tema de las "asociaciones de padres de familia" informada de la apertura de unas clases de religión y moral por la de Santiago de Compostela para los alumnos de la Escuela Normal y del Instituto y del dictado de una serie de conferencias sobre iguales temas por la de Pamplona s.f., "Crónica General", BOE de Palencia, año 82, 2 de diciembre de 1932, núm. 23, págs. 658-659).

Seguían a estas normas las que hacían referencia al establecimiento de cursos superiores de religión y círculos de estudios para las juventudes católicas y las relativas al catecismo de adultos a efectuar en las misas de domingo. El escrito finalizaba recomendando el establecimiento en todas las localidades de la "Sección de la Asociación de Padres de familia", ya erigida el 8 de abril con carácter diocesano, "al objeto de garantizar los derechos de los católicos en la escuela oficial y establecer en su caso Escuelas privadas católicas, gratuitas o de pago, en las localidades respectivas". Frase genérica en la que, contrariamente a lo señalado por el obispo de Vitoria, no aludía a la clara necesidad de fundar estas, si bien insistía en que los padres de familia debían velar "mediante el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, de que la enseñanza en las escuelas públicas no sea irreligiosa y mucho menos impía, haciendo observar las disposiciones vigentes en las que se prohíbe terminantemente sea la escuela dogmática ni sectaria ni se haga en ella propaganda política, social filosófica ni religiosa".

Acataba la pastoral advirtiendo a los parrocos que al comenzar el curso recordaran a los padres el deber "gravísimo" que les incumbía de vigilar la asidua asistencia de sus hijos a la catequesis, añadiendo a estos efectos a la pastoral, como apéndice, una "Advertencia a los padres y educadores cristianos" sobre la formación religiosa de los niños y señalando que la misma debería leerse todos los años el domingo precedente a la reapertura de los cursos.⁽¹⁷⁷⁾

(177) 10 de octubre de 1922, "Exhortación pastoral y mandamiento episcopal sobre la formación religiosa de la juventud", BOE de Grinuela, año 51, 16 de noviembre de 1922, núm. 46, págs. 389-408.

Siguiendo la pauta marcada por el fallecido Dr. VILA MARTÍNEZ en su pastoral del mes de junio, el administrador apostólico de la diócesis de Gerona, Dr. PERELLÓ y POU, procedió a dictar en noviembre de 1932 una serie de disposiciones en pro de la organización de la catequesis parroquial que apenas contienen novedad alguna en relación con las dictadas en otras diócesis, salvo la instauración de un "Día Catequístico", a celebrar en todas las parroquias una vez al año, como modo de "sostener el interés y ayuda a fomentar el amor al catecismo", así como un "Triduo", "Asamblea Catequística" y "Semana Catequística" de carácter diocesano. Junto a ello hacía la consabida advertencia a los párrocos sobre el deber que les incumbía de recordar a los padres, "ante la gravedad de las actuales circunstancias", la obligación de enviar a sus hijos a la catequesis, debiendo colaborar con el sacerdote en este cometido "las escuelas y asociaciones católicas... para atraer a... aquellos niños que por errores o malicia de sus desgraciados padres se ven cohibidos o impedidos de asistir al catecismo". A esta advertencia seguían las disposiciones sobre los días en que deberían impartirse las clases, locales, erección de la "Congregación de la Doctrina Cristiana", comunión solemne de los niños, catequesis para adultos, etc., haciendo especial hincapié en la utilización de la "Folla parroquial" como medio de difusión de lecciones de catecismo y, en general, de la doctrina de la Iglesia "indicando su valor e impugnando las objeciones que constantemente contra ella se difunden", por lo que era de suma utilidad su reparto gratuito "en todos los hogares de cada parroquia, aun en casa de los mismos enemigos de nuestra Santa Religión", pues los efectos de tal apostolado "pronto o más tarde, trascenderán en la vida religiosa de cada

pueblo".⁽¹⁷⁶⁾

Iras una introducción en la que destacaba como la Iglesia había recibido de su fundador el mandato de instruir a todas las gentes, aludiendo a su predilección por los niños y a las consecuencias fatales que para ellos revestía la falta de instrucción religiosa, la pastoral que, con motivo del adviento, redactó el Dr. IRURITA para referirse nuevamente al tema de la enseñanza, trataba de tres aspectos esenciales: las obligaciones de los padres, las de los maestros y las de los fieles en general.

A los primeros les volvía a exponer sus deberes respecto a la educación cristiana de sus hijos y, seguidamente, les daba normas concretas de actuación a fin de que se opusieran a la implantación de la escuela laica. Estas eran: 1º) Trabajar por el restablecimiento de la ense-

(176) 3 de noviembre de 1932, "La enseñanza del catecismo", BOE de Gerona, año 76, 28 de noviembre de 1932, núm. 13, págs. 310-314.

Es probable que el interés del Dr. PERELLÓ en insistir en estas fechas en la organización de la catequesis en la diócesis de Gerona, viniera estimulado por la última conferencia episcopal celebrada en la provincia tarraconense el 27 de octubre como preparatoria de la de metropolitanos que había de tener lugar del 3 al 6 de noviembre; conferencia en la que, en realidad, se reiteraron gran parte de los puntos ya tratados en la de 18 de julio (ver la nota 149), si bien, en lo que a la enseñanza se refiere, el acta de esta última conferencia fue mucho más explícita que la anterior, acordándose "como medio para intensificar en el pueblo fiel el conocimiento del catecismo", la predicación en la misa dominical, la catequesis en días laborables, el trabajo de las "Asociaciones de Padres de familia y todos los padres de alumnos, en general...", para "excedir la labor sectorial de algunos maestros" y el estímulo, "siempre indirectamente", de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, la fundación de escuelas parroquiales, el fomento de instituciones para la formación de maestros católicos y la organización de cursillos o conferencias mientras no pudieran fundarse institutos de enseñanza superior. (*Església i Estat durant la segona...*, III, págs. 35 y 36 y 270 a 273.)

nanza religiosa en las escuelas publicas y, si ello no se conseguia, por lograr que el Estado subvencionara a las escuelas catolicas; 32) Vigilar que la ensenanza laica no se convirtiera en "sectaria" o "antirreligiosa", "acudiendo en protesta de las Autoridades contra aquellos maestros que delinquieran "" en esto"; 33) Enviar a sus hijos a los colegios religiosos o escuelas parroquiales y sufragar los gastos de los niños pobres que quisieran educarse en ellos; 42) Adherirse a la "Asociacion de Padres de Familia" y a la "Congregacion de la Doctrina Cristiana". Por ultimo les reiteraba su primaria obligacion de ser los primeros educadores de sus hijos.

Al reiterarse a los maestros los configuraba como "auxiliares de los padres" en la labor educadora de los niños, razon por la que no eran libres de darles las ensenanzas que quisieran; estas deberian ser, en todo caso, "conforme a la voluntad razonable de sus padres". Ademas, si los niños eran catolicos, deberian formarlos catolicamente, tal como prescribia el Derecho canonico.

Reconoceria el obispo, sin embargo, que muchos maestros no ensenaban el catecismo ni cuando la ley les obligaba a ello, razon por la que se preguntaba que harian ahora que les eximia de tal obligacion temiendo que, por ello, muchos hicieran "labor sectaria"; junto a estos habria otros muchos -esperaba que la mayor parte- que procurarian dar a los niños formacion cristiana, "al menosn valiendose de la ensenanza religiosa ocasional y con sus buenos ejemplos y consejos oportunos". Siendo consciente de que este consejo podia implicar una incitacion a transgredir, siquiera fuera rozandola, la circular de 12 de marzo, el obispo aadia in-

(179) Es la primera vez que el concepto de "delito" es esgrimido por un prelado.

mediatamente para fundamentar sus palabras. "Cualquiera que sean las leyes humanas, la ley divina, que esta por encima de ellas, obliga gravemente a los maestros a educar cristianamente a los niños bautizados".

El Dr. IRURITA se dirigia en ultimo lugar "al pueblo fiel" recordando que tambien "los amos y los padrinos" estaban obligados a procurar la educacion cristiana a todos los que les estaban sujetos o encomendados, y -cosa que hasta este momento ningun prelado habia llegado a hacer- se dirigia seguidamente a "los Gobernantes... y de un modo especial (a) los Directores de la Enseñanza Publica", advirtiéndoles que "tienen el deber de vigilar la educacion cristiana, fomentarla y suplirla en caso de omisión de los padres y de los maestros por estos escogidos. Y hay de ellos si no lo cumplen!. Porque seran tambien juzgados y con extremo rigor..."

Señalaba el obispo finalmente que todos los catolicos estaban obligados, "por deber de caridad", a cooperar en la obra de instruccion religiosa contra la que luchaba la masoneria; de ahí que ir contra tal actuacion era una obligacion suprema para todos y especialmente para los sacerdotes. (**)

(180) 14 de noviembre de 1932, "Exhortación pastoral de Adviento", BOE de Barcelona, año 75, 26 de noviembre de 1932, núm. 22, págs. 433-442. No cabe duda que las exhortaciones dirigidas a los maestros oficiales por el Dr. IRURITA no cayeron en saco roto a juzgar por la noticia que, ya en julio de 1933, publicaría "El Sol" dando cuenta de la multa impuesta por el gobernador civil de la provincia a varios maestros de Gálida "por haberse realizado en las escuelas nacionales actos contrarios a lo que la Constitución ordena sobre el feticismo en las escuelas", actos que habian sido denunciados por las autoridades locales y debidamente comprobados, y multa a la que el gobernador daba publicidad "para evitar que se repitan los casos y se tengan que imponer nuevas sanciones." "El Sol", 14 de julio de 1933).

También el arzobispo de Santiago escribiría con motivo del tiempo de adviento una pastoral lamentando la situación de España en general y, particularmente, la de la enseñanza religiosa. Comenzaba refiriéndose a la necesidad de oración y penitencia para la salvación de la sociedad "víctima de un malestar espiritual y material tan profundo y tan universal que no conocio par desde el tremendo castigo del diluvio", según había señalado el papa en su encíclica "Charitate Christi".

"Claramente echareis de ver, amadisimos hijos, que este malestar espiritual y material que lamenta el dolorido Pastor Supremo de la Iglesia parece que ha escogido a nuestra querida patria como una de sus víctimas predilectas. Y si mucho nos duelen la miseria y la pobreza a que se ven reducidos hoy muchos de nuestros amadisimos diocesanos por la falta de trabajo y de medios económicos para subvenir a sus necesidades, nos duele más profundamente la ruina y la miseria espiritual, a la que acaso van a precipitarse no pocos de ellos por las trabas y los obstáculos casi insuperables que los poderes civiles vienen poniendo a la labor evangelizadora de la Iglesia."

Ante tal situación, producida por "el empuje furioso de nuestros enemigos", había muchos católicos sumidos en la indiferencia, sin darse cuenta "de la trascendencia de los actuales momentos, no solo para la causa de la religión, sino para la causa de muchos de sus más sagrados derechos"; era necesario que estos católicos cambiaran una actitud que, para el arzobispo, venia a ser casi pagana y condicionada por unos hechos que describía de una manera suficientemente reveladora de su opinión sobre la época:

"El ajetreo de los tiempos presentes, las graves complicaciones con que se ha reproducido la lucha por el pan cotidiano; el deseo de subvenir a muchos gastos, completamente superfluos, pero que han adquirido categoría de imprescindibles, han robado a muchos hogares y a muchas personas el tiempo necesario para adquirir la más elemental educación religiosa. Esto, unido a la intensa labor destructora de los sentimientos cristianos,

realizada por tantos periódicos antirreligiosos, por tantas revistas obscenas, por tantas conferencias blasfemas, y a la trivialidad, cuando no inmoralidad descarada, de todos los espectáculos profanos, ha venido a neutralizar de la manera más lamentable la educación religiosa que se recibía antes en el seno de las familias y en las escuelas públicas, y a amortiguar en gran parte la que, aun a costa de impropia tarea, viene dándose en la catequesis de niños y adultos."

Por tales hechos se preguntaba el Dr. Zacarías MARTÍNEZ NÚÑEZ: "¿cómo, pues, podremos pedir moralidad, justicia y caridad en las costumbres privadas y públicas de los hombres y en las leyes de los gobernantes si se ignoran casi de raíz la doctrina y los mandamientos de Cristo, única fuente de toda moralidad, de toda justicia y de toda caridad?". Era necesario, pues, volver a colocar el catecismo como base de toda educación, misión en la que era indispensable el concurso de los padres de familia, así como de

"... las autoridades civiles, que no están revestidas del poder temporal para el logro de sus ambiciones o el triunfo de sus sistemas de partido, sino para ayudar a la implantación de la justicia y del bienestar temporal y espiritual de los individuos y de los pueblos. Y obvio es que, cuando estas autoridades olvidan o quieren trastocar el altísimo fin que se les ha encomendado, es más urgente la obligación que tienen los padres de familia de examinar escrupulosamente las fuentes en que han de beber sus hijos la educación para el futuro y apartarlos con presteza de aquellas que puedan envenenar sus almas."

Tampoco podían excluirse de esta labor de educación religiosa del pueblo las clases más favorecidas, pues dirá, parafraseando al Dr. MUÑOCA pero con un diseño distinto de escuela: "¿Cuánto daríamos por poder fundar y mantener una escuela parroquial a la sombra de cada uno de los campanarios de nuestra diócesis!", escuelas en las que los parrocos podrían "dedicar toda su actividad a la educación

cristiana y científica" de los niños de la religión siempre y cuando los religiosos les asegurasen una existencia digna y decorosa.

(181) Choca con esta propuesta, que ya hemos visto realizada por el arzobispo en su pastoral de 15 de febrero, la publicación de la siguiente "consulta" en el Boletín Eclesiástico de Toledo:

"Como medio de que los padres envíen sus hijos al catecismo pense que sería muy conveniente añadir a la enseñanza del catecismo las asignaturas que suelen enseñarse en las escuelas. De esta manera he logrado una regular asistencia a la escuela parroquial. Pero se me dice que algunas personas, a quienes por lo visto molesta que el párroco enseñe y fomente la cultura, intentan denunciarle por enseñar sin tener título académico que se faculte para ello. ¿Se me puede prohibir el enseñar no percibiendo retribución alguna?"

Tras resaltar el derecho de la Iglesia a enseñar toda clase de disciplinas y añadir a la competencia de los sacerdotes, suficientemente preparados por la carrera eclesiástica, la consulta era contestada en los siguientes términos:

"... Un sacerdote puede tener competencia científica; puede ser un gran pedagogo y aun escribir libros que los maestros pueden utilizar con provecho; pero no puede enseñar a leer y escribir ni a sumar y multiplicar. La ley se lo prohíbe, y si se arriesga a reunir unos muchachos y a hacerles la obra de caridad de enseñarles algunas cosas útiles para la vida, se verá expuesto a que los amantes de la cultura del pueblo (o) le denuncien, y a que no solo le sea cerrada su humilde escuela o colegio, sino a que se le quite por intruso y pague caro el ejercicio de una obra de caridad.

En resumen, las llamadas escuelas parroquiales han de limitarse a la instrucción y educación religiosa. Únicamente los sacerdotes que tengan título de maestro u otro equivalente podrán enseñar otras materias, y esto previas las formalidades legales."

(c.f. "Consultas", BOE de Toledo, año 88, 2 de noviembre de 1932, núm. 2), pág. 231). Hay que destacar como el arzobispo proponía aquí la creación de verdaderas escuelas, no la simple enseñanza complementaria a que había aludido el 15 de febrero. Ya hemos apuntado como en la conferencia episcopal tarraconense de 16 de julio se acordó el procurar que los sacerdotes aptos para ello obtuvieran el título de maestro (ver la nota 149); mas sobre toda esta cuestión hay que tener en cuenta lo que había establecido el decreto de 8 de septiembre de 1931 que el redactor del BOE de Toledo parecía desconocer.

Con esta clara alusión a la necesidad de contribución de los fieles al mantenimiento del clero insistiría el arzobispo en como eran precisamente los sacerdotes los mas indicados en trabajar "para restaurar la educación cristiana de los pueblos" por medio de "la explicación de la homilia en los domingos, la catequesis de parvulos y adultos, la propagación de la hojas parroquiales, la cooperación a las obras de defensa de la juventud..."

Acabaría exhortando nuevamente a todos sus diocesanos a la oración y la penitencia así como a la renovación interior en el tiempo de Adviento, ya que, diría: "... tened por cierto que si nos renovamos en el interior, conforme a estos supremos ejemplares, nos habremos renovado también en el exterior y se habrán renovado las costumbres públicas, y esta renovación se reflejará en las leyes, y podremos esperar con confianza que nuestra patria vuelva a ser grande, como lo fue en sus siglos de oro, por la fe incommovible, por los elevados ideales y por el acendrado fervor religioso de todos sus hijos".

Finalmente, "atendiendo la gravedad de los actuales momentos por las nuevas leyes religiosas que van a discutirse en las Cortes",⁽¹⁸²⁾ ordenaba una serie de actos liturgicos a fin de impetrar la misericordia divina.⁽¹⁸³⁾

(182) Alusión al proyecto de ley de confesiones y congregaciones religiosas; Ver *Església i Estat durant la segona*, III, pág. 567.

(183) 25 de noviembre de 1932, "Exhortación pastoral al venerable clero y amados fieles del Arzobispado con motivo del Adviento", BOE de Santiago, año 71, 30 de noviembre de 1932, núm. 2685, págs. 355-362.

Rompiendo la línea de las numerosas y extensas pastorales de estas fechas, el Dr. Manuel GONZALEZ GARCIA, volvería a dirigirse ahora a sus diocesanos con otro de sus sencillos, casi simples, escritos; "" en el les indicaba que "al grito de moda oficial '¡Nada de Catecismo!' que muchas veces se traduce en '¡todo contra el Catecismo!' había que oponer el de '¡todo por el Catecismo!' ya que "¿quién, que quiera un poco, no mas, a su religión y a su Patria, puede impasible ver venir generaciones irreligiosas, sin temor ni esperanza, sin fe ni conciencia, sin ley de Dios ni freno de respeto a la Autoridad de los hombres que de él vienen".

Por esta necesidad de la religión tanto para la vida sobrenatural como para la convivencia civil y el acatamiento a una autoridad basada en el origen divino del poder y a la que, pese a su actual actuación, estaban atribuidas las obligaciones que acabamos de ver consignadas por el arzobispo de Santiago, debían todos los católicos aprestarse a la enseñanza del catecismo, ya que aun aquellos que por

(184) Tan solo una pastoral, fechada en "Roma y Turin" el día de la fiesta de Cristo Rey (último domingo de octubre) dirigió el Dr. GONZALEZ GARCIA a sus diocesanos en 1932. Les hablaba en ella de la entrevista mantenida con el papa con motivo de la visita "ad limina" y de los encargos que este le había hecho, siendo uno de ellos el de trabajar en la instrucción religiosa, ya que "los enemigos han trabajado mucho y han hecho todo lo que han querido"; por ello exhortaba a los fieles para que colaboraran con y por sus sacerdotes ayudándoles, sobre todo, a enseñar el catecismo formando en cada parroquia no sólo una catequesis sino primero una "academia de catequesis y con estos un verdadero Catecismo-Escuela con Oratorio festivo" como había en muchos lugares de Italia dando frutos de renovación de barriadas y pueblos. Esta idea, sin embargo, no sería desarrollada por el prelado por medio de reglamentos o instrucciones concretas (fiesta de Cristo Rey de 1932, "Carta Pastoral a mis queridos diocesanos, La visita al Papa y el encargo del Papa," BOE de Málaga, año 45, 15 de noviembre de 1932, núm. 12, págs. 265-271).

sus condiciones no pudieran dedicarse expresamente a ello, tenían, no obstante, una forma de difundir un "Catecismo mínimo", lo cual se hacía cada vez que se obraba como católico y cada vez que se ayudaba a los que se dedicaban a enseñarlo, ya fuera con dinero, con trabajo o con oraciones, de ahí que todos los fieles pudieran ser, en cierta forma, catequistas. (**)

Vacante la sede de Toledo escribiría su Vicario capitular y obispo auxiliar, Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO una larga "carta" al clero diocesano para hablarles, finalizando ya el año, de la enseñanza religiosa y de la actuación a seguir en relación con ella.

Introducía el vicario el tema asociando el establecimiento del laicismo en la enseñanza a una verdadera estrategia de combate:

"Desencadenada la revolución, el 'fuerte armado' ha puesto sus ojos, con intención que a nadie se oculta, en lo que, de hacerlo suyo, le daría el triunfo definitivo: en la porción mas amada de la Iglesia, que es la niñez.

"No puede negarse que sus ataques son certeros y que viene disponiéndolo todo con habilidad y prudencia para sus fines, que nosotros no hemos sabido o no hemos querido desplegar para los nuestros. Las amenazas que, en tiempos que llamamos mejores, parecían nubecillas fáciles de deshacer, son ya trágica y espantosa realidad; y el enemigo, dueño de todas las posiciones, avanza confiado, llenando el campo de la Iglesia de desolación y ruina."

A la medida de la implantación del laicismo en la enseñanza se estaba siguiendo ahora, a juicio del Dr. ROCHA PIZARRO, que por primera vez aludía a ello, "otra que la

(185) a.t. "Todos catequistas.", BDE de Málaga, año 65, 15 de diciembre de 1932 núm. 13, págs. 318-319.

confirma y arianza, la selección de los ejecutores..., llevando a las Direcciones y Escuelas Normales a quienes sientan el laicismo en toda su crudeza y puedan separar de las escuelas primarias... todo lo que no sea fervoroso laicismo". La actuación que, sin embargo, tendría más graves consecuencias no sería esta sino la de negar el derecho a la enseñanza a las congregaciones religiosas, "porque bien se ve que va derechamente contra la enseñanza privada y es anuncio fatídico de la escuela laica y única".¹⁸⁶¹ La conclusión que de todo ello sacaba el vicario que, como se ve, obviaba lo establecido en el artículo 49 de la Constitución, no era otra que el inicio de "la hora del enemigo" y "del poder de las tinieblas".

¹⁸⁶¹ Había sido "El Debate" el que nuevamente había comenzado a insistir en los peligros de la escuela laica y única y en el propósito de la República de instaurar esta. Así, en un editorial publicado el 17 de noviembre titulado "la escuela de la revolución" había aludido a las declaraciones del ministro de Instrucción Pública sobre un aumento de cien millones en el presupuesto de su ramo, cantidad que, en gran parte, iba a destinarse a la creación de nuevas escuelas. Para el editorialista era este un grave despilfarro para el erario de la nación, pero lo peor, con todo, era la "orientación revolucionaria, antisocial y antipatriótica que a esas escuelas va a darse, montándolas en plan irreligioso y ateo, bien que disimulada la sordidez de su materialismo con el repostero de la neutralidad laica", neutralidad que, al ser imposible, era una falacia con la que se quería ocultar "la persecución en el alma del niño de toda espiritualidad, de toda noción sobrenatural, y como fatal consecuencia -concluye el periódico- habrá una exaltación de todos los instintos que son el motor de la inevitable subversión social" que, en definitiva, era la filosofía que impulsaba la actuación del ministro de Instrucción Pública. ("El Debate", 17 de noviembre de 1932).

Estas palabras eran, desde luego, contestadas por el gobierno y, este insistía, así, en que la escuela laica no era persecución contra la iglesia, ya que no se trataba de "la escuela impia y antirreligiosa...". ("El ministro de Justicia, en Córdoba sostiene que la escuela laica no significa persecución contra la Iglesia", "El Sol", 29 de noviembre de 1932) pero para "El Debate" existía -como había puesto de relieve el Dr. ROCHA FIZARRO- un hecho que revelaba la finalidad última del gobierno y este era la inutilización sistemática de maestros y profesores tanto oficiales como privados ("Una política escolar iconoclasta sin par en Europa", "El Debate", 18 de diciembre de 1932), y el nombramiento irregular de inspectores de primera enseñanza. Para el citado periódico la meta de estas actuaciones del ministerio no era

Por ello era necesario, en una crítica de la propia actuación eclesial, "salir denodadamente de nuestra proverbial indolencia, reconociendo nuestra imprevisión y el tiempo lastimosamente perdido".

Porque el Dr. ROCHA PIZARRO, a pesar de la descripción de los hechos y peligros que acababa de hacer, confiaba en la capacidad de los católicos para combatirlos y, así, proponía como "medio efficacísimo de desbaratar los planes sectarios", el de la creación de escuelas católicas, y, mejor todavía, escuelas parroquiales, de suerte que no hubiera parroquia que no tuviera su escuela propia "con todos los adelantos de la sana pedagogía moderna", idea esta ya sugerida, como hemos visto, por otros prelados y que en este caso no implicaba "prima facie" contradicción con lo que, según acabamos de ver, había publicado el mismo boletín de la archidiócesis el mes anterior, toda vez que no apuntaba expresamente la función del párroco como maestro, a diferencia de lo sugerido por el arzobispo de Santiago.

otra que la implantación de la escuela única y la de la coeducación, de acuerdo con el programa socialista y los dictados de la masonería, extremos a los que apuntaba la creación de un magisterio único, equiparando los maestros a los demás funcionarios docentes del Estado y el monopolio estatal configurado por el artículo 26 de la Constitución y desarrollado en la práctica por las mutilaciones de que iba siendo objeto la enseñanza privada. Ahora bien, había, para el editorialista, un escollo que, en el diseño de escuela estatal, era el más difícil de superar y era el de la gratuidad de esa escuela única que el programa político quería crear, debiendo fijarse en el fracaso de la vecina Francia, incapaz de realizar tal empresa, incapacidad que, dado el atraso cultural de España, era más palmaria. Mas a este fracaso material había que unir el pedagógico y social por cuanto la escuela única representaba "una socialización de la niñez que constituye la más monstruosa usurpación de los derechos paternos", de ahí la injusticia de propugnar en España un sistema escolar "que conculca derechos de la sociedad, que atropella la libertad de enseñanza y [que] viola la conciencia y la voluntad de los padres de familia" ("Política escolar socialista", "El Debate", 27 de diciembre de 1932).

El prelado era, no obstante, consciente del gran esfuerzo personal, material y económico que tal propuesta implicaba y, de ahí, que solo la considerara realizable en las parroquias de las capitales de provincia o en pueblos con numeroso vecindario; por ello fijaba su atención en la necesidad más inmediata y factible: la de la enseñanza del catecismo, indispensable para toda vida recta; catecismo que había de ser correctamente enseñado para evitar su olvido con la edad, "pues es notorio -diría el vicario, quejándose de una educación que hemos visto alabada en la pluma de otros prelados y que hace pensar en la también destacada pasividad de la Iglesia, que el mismo denunciaba- que los maestros, por regla general, se limitaban a llenar las cabezas de los niños de fórmulas sin explicación ni sentido, y, consiguientemente, sin influencia alguna en la vida cristiana; y esto... no es enseñar el Catecismo, si no tomar la lección del Catecismo... para lo cual no es necesario ser maestro"; y, abundando en la misma idea añadía; "... si su enseñanza ha de ser puramente teórica, si no ha de ordenarse a informar la vida entera del hombre..., es tiempo perdido el que se emplea en enseñarlo", frases que no dejan de recordar las razones que, para fundamentar la actuación del gobierno, expusiera ALCALA ZAMORA al cardenal VIDAL en su carta de 28 de mayo de 1931.¹¹⁷⁷

Pero el Dr. ROCHA PIZARRO no se quejaba tan solo de esa práctica de los maestros ante la que la Iglesia había estado indiferente, el vicario general de Toledo criticaba también la actuación del propio clero en este punto, lamentando el carácter rutinario de las mismas catequesis parroquia-

¹¹⁷⁷) Ver la nota 22.

les,*** siendo urgente. a su juicio, corregir todos sus

(186) Un contraste acusado entre la actuación del magisterio y la del estamento eclesiástico hubiera hecho inexplicable en realidad esta denunciada pasividad de la Iglesia, la cual, por otra parte, hace pensar en la dosis de razón que amparaba los argumentos de quienes, como ALCALA ZAMORA o UNAMUNO, veían lo positivo que, tanto para la vida civil como para la religiosa, podían tener las medidas estatales: medidas que, a juzgar por las palabras del Dr. ROCHA PIZARRO, que ya hemos visto en el informe de los Dres. CARRERAS y VILAPLANA y en los comentarios de otros prelados, venían a plantear ahora un verdadero "examen de conciencia" para algunos sectores eclesiásticos y, desde luego, la necesidad de una decidida actuación para todos ellos, como vamos viendo; actuación que de no haber sido por la implantación oficial del laicismo, cabe imaginar que no se habría producido, continuando la Iglesia española en una heredada inercia, causa de muchas de las críticas que se le dirigían. Entre estas críticas destaca, como indicamos, la formulada por D. Miguel de UNAMUNO en 29 de julio en un comentario que, bajo el título "Maestros y Curas", era continuación del que había publicado el 29 de enero anterior. En él, tras aludir a la eliminación del crucifijo en las escuelas públicas y la forma dispar en que, con relación a esta orden gubernamental, habían actuado muchos maestros, no dejaba de destacar la precedente actitud negativa del clero:

"Y a propósito del laicismo en las escuelas nacionales, conviene recordar cuál era la situación del maestro nacional al respecto de la enseñanza religiosa durante el que hemos dado en llamar el antiguo régimen. En los ras de los lugares el cura se preocupaba poco del maestro y de cómo enseñara, porque ejercía su cura de almas con las menores preocupaciones posibles. Pero en otros lugares se dedicaba a querer dirigir al maestro y a tutelarle cuando no a sofugarlo. Sabemos de párrocos que asistían a los exámenes para examinar a los niños de catecismo, amonestar públicamente al maestro por las deficiencias de la instrucción religiosa de los discípulos y añadir que otras nociones eran ociosas. Leer, escribir, las cuatro reglas de contar, y luego catecismo y más catecismo. Y prácticas de devoción en la escuela y llevar a los niños a misa los domingos...

"El que esto escribe, siendo rector de Universidad, antes de 1917, tuvo que decirle a un cura que se le fue a quejar de lo mal que, a su juicio, enseñaba el catecismo el maestro que fuese él, el cura, a la escuela a ciertas horas o ciertos días, a suplir las deficiencias del maestro, lo que era, no ya su derecho, sino su deber, según la legislación de entonces..."

defectos, al ser la enseñanza de la doctrina religiosa la obra más importante de las confiadas a la Iglesia.

Para contribuir a ello dictaba el obispo una serie de mandatos que eran complemento de los fijados en su día por el cardenal SEGURA para la catequistas dominical en la archidiócesis, estableciendo así, dada la insuficiencia de aquella ante las nuevas circunstancias, el catecismo semanal y, junto a ello, la "Asociación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias, la formación de catequesis auxiliares, la colaboración a prestar por todos los sacerdotes y religiosos, debiendo los arciprestes, por último, informarle trimestralmente del grado de cumplimiento de estas disposiciones. (189)

De estos recuerdos sacaba UNAMUNO la siguiente conclusión:

"La separación de la Iglesia y el Estado y el nuevo régimen de laicismo en la enseñanza va a obligar al clero católico español a preocuparse de la instrucción religiosa de los hijos de los fieles, menester que tenía descuidadísimo, dejándose a los pobres maestros para poder luego reprenderlos como a pasantes o monaguillos. Y con ello ganará la Iglesia. Porque los curas, para poder enseñar doctrina cristiana a los hijos de los fieles, tendrán que aprenderla. Que buena falta les hace. Mal, muy mal, vivían los más de los curas de aldeas; pero tampoco se ganaban esa pobre vida. Su misión pastoral, de enseñanza, la cumplían desastrosamente. El cura llamado de misa y olla era como el clero negro, o secular, de la Iglesia ortodoxa rusa, un aldeano más sin más instrucción evangélica que sus convecinos..."

Y la razón de esta situación, tan duramente descrita por el autor, era porque

"La situación de prepotencia de que la Iglesia gozaba en España, respecto al Estado, le acostumbró a la relajación de sus deberes evangélicos, a preocuparse más de inspeccionar la enseñanza oficial que de organizar la propia, y sobre todo a descuidar su magisterio propio..."

("El Sol", 29 de julio de 1932).

(189) 3 de diciembre de 1932, "Carta del Excmo. sr. Vicario Capitular al clero diocesano", BDE de Toledo, año 88, 20 de diciembre de 1932, n.ºm, 23, págs. 357-364.

Cerramos, finalmente, la alusion a las declaraciones individuales del episcopado en el año 1932 con una referencia que tan solo hemos encontrado en el boletín eclesiástico del obispado de Mondoñedo: el hecho de que la cooperacion de los rieleos catolicos, fueran padres de familia o maestros, con las escuelas laicas y neutras, formara parte del elenco de pecados reservados a la absolucion del ordinario. Esta realidad, implantada en la diocesis en 1916 por el Dr. SOLÍS, hizo que en 9 de diciembre de 1932 el administrador apostólico, Dr. Rafael BALANZA NAVARRO, obispo de Lugo, procediera ante la nueva legislacion oficial, que hacia "practicamente imposible" evitar tal cooperacion y al haber variado por ello las condiciones fijadas por la Iglesia para los pecados reservados respecto a este hecho- a la supresion de la reserva, "teniendo en cuenta, además, que la reservacion de tal pecado en las presentes circunstancias no sólo no es útil sino que al contrario se haria muy gravosa a muchísimos rieleos y seria ocasion de graves inquietudes e intranquilidad espiritual, así para los Confesores como para los penitentes..."¹⁹⁰

Ya entrado el año 1933, el 15 de febrero, el arzobispo MARTÍNEZ NUÑEZ haria lo propio, levantando esta reserva en toda la archidiócesis compostelana.¹⁹¹

(190) 9 de diciembre de 1932, "Auto reformando el elenco de pecados reservados en esta Diocesis", BOE de Mondoñedo año 19, 20 de diciembre de 1932, núm. 24, págs. 220-222. (La singularidad de este documento nos hace incluirlo en el Apéndice, ver el núm. 19).

(191) 15 de febrero de 1933, s.f., BOE de Santiago año 12, 15 de febrero de 1933, núm. 269, pág. 59.

13. La conferencia de metropolitanos de noviembre de 1932.

Ya hemos apuntado en otro lugar que la urgencia con que, a raíz de la publicación del artículo 26 de la Constitución, se reunió la conferencia de metropolitanos de 1931, impidió su debida preparacion y el consiguiente y previo envio por el episcopado de las propuestas de los puntos que debian ser tratados.

No sucederia igual en 1932, y así, a solicitud del cardenal VIAL, los distintos prelados, bien reunidos en las respectivas conferencias episcopales de sus provincias, bien en forma individual, enviaron, entre los meses de julio y octubre sus sugerencias que, a tenor de la importancia que, como hemos visto, dió la jerarquía al tema de la enseñanza en 1932, eran coincidentes en proponer que este tema fuera tratado como uno de los puntos esenciales en la conferencia y para el que todo el episcopado formulo sus propias recomendaciones proponiendo distintas -o coincidentes- medidas a adoptar para solventar el problema del laicismo en las escuelas oficiales, de acuerdo con la importancia que a cada posible actuacion darian en los documentos ya publicados o que irían publicando a lo largo del año.

La conferencia tuvo lugar en Madrid, del 3 al 6 de noviembre y en ella, en efecto, y como señalan Batllori y Arbeloa, la cuestión de la enseñanza dió lugar al debate mas largo y profundo, dando los metropolitanos "normas muy concretas sobre la difusión de la cultura religiosa entre los fieles, sobre la defensa y fomento de las escuelas catolicas, sobre la potenciación de la catequesis y la formación de maestros catolicos, y sobre las obras circum-

escolares y post-escolares" obras que, según hemos visto, también habían sido tomadas en consideración en el "programa de Acción Confederat" de la "Asamblea de Padres de Familia" celebrada a finales de octubre).⁽¹⁹²⁾

Estas normas eran, como no podía ser menos, un compendio así bien con alguna novedad, dado su carácter nacional- de las distintas directrices de organización ya formuladas o que se formularían por los obispos y, así, en síntesis, se referían a: difusión de la cultura religiosa utilizando la prensa católica y las hojas parroquiales, la predicación y la organización de conferencias; promoción de asociaciones de padres de familia u otras similares; petición de una subvención del Estado para las escuelas católicas, proporcional al número de alumnos; erección de nuevas escuelas y apoyo a las existentes; implantación de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias y creación de un órgano diocesano para el fomento del catecismo; enseñanza de este al menos tres días semanales; formación de catequistas y maestros católicos, procurándoles en primer lugar un internado en Madrid, en el que recibirían instrucción religiosa y después una academia en la que pudieran preparar oposiciones; fomento de cantinas, colonias escolares, etc. así como de Congregaciones marianas, juventudes católicas u organizaciones similares para los jóvenes y establecimiento de cursos de enseñanza superior de religión.⁽¹⁹³⁾

(192) Ver la nota 142.

(193) *Església i Estat durant la segona...* tomo III, págs. 307, 310 y 321 a 325. Para las observaciones formuladas por los obispos, bien particularmente o reunidos en las conferencias episcopales de las distintas provincias, sobre la cuestión de la enseñanza ver págs. 338, 341, 342, 347, 349, 356 a 361, 370-371, 374, 379, 383, 384, 387, 391-392, 394-395, 397-399, 404, 406, 413 y 415-416.

Queremos recordar aquí que los prelados que en 1932 suscribieron documentos insistiendo o dando nuevas directrices sobre la enseñanza religiosa en sus diócesis tras la conferencia de metropolitanos fueron, como ya hemos visto y entre los consultados, los de Barcelona, Santiago, Málaga y Toledo. Creemos más que probable -por citar sólo algún ejemplo- que el énfasis puesto por el Dr. MARTÍNEZ en su pastoral de 25 de noviembre en algunas medidas (creación de escuelas, difusión de hojas parroquiales, atención de la juventud) o la decisión del Dr. ROCHA PIZARRO de dictar normas de organización, trajeran su causa de estos acuerdos.

14. Las reseñas de las actuaciones.

Siendo como eran los boletines diocesanos órgano de expresión del episcopado y de formación e información del clero, la jerarquía española tuvo especial interés en este periodo en que en ellos se fueran reseñando los acontecimientos que venían a confirmar como los católicos pasaban a cumplimentar las orientaciones de sus respectivos prelados que, como hemos visto, habían sido asumidas, casi con carácter general, por la conferencia de metropolitanos del mes de noviembre. Ya hemos aludido brevemente a estas reseñas¹⁷⁶ que probablemente se publicaron como estímulo

(194) Ver la nota 176.

para sacerdotes y fieles a fin de animarles ante la ingente labor que la Iglesia debería realizar frente al establecimiento de la enseñanza oficial de carácter laico⁽¹⁹⁵⁾ y dar noticia de la vitalidad del catolicismo; queremos pasar ahora, no obstante, a darles un tratamiento conjunto e independiente para mejor realizar esta otra actuación eclesial paralela a la de las exhortaciones: la de la narración de las realizaciones prácticas. (Preciso es destacar, no obstante, que el que aludamos aquí con carácter exclusivo a las noticias de los actos celebrados en relación con la enseñanza no quiere decir, ni mucho menos, que los boletines eclesiales se limitaran a la publicación de estos; antes al contrario, hay que resaltar lo numerosas y continuas que son durante el período la referencias a actos de carácter meramente religioso - procesiones, peregrinaciones, misiones, festividades de santoral, etc., etc. - en que, una y otra vez, se reitera su éxito y la afluencia, piedad y fe de los fieles).

La primera noticia publicada en 1932 sobre actos concretos en relación con la enseñanza religiosa aparece reseñada, entre los boletines consultados, en el del arzobispado de Sevilla explicando la celebración, a finales del mes de enero, de una "Semana catequística" organizada "por un grupo de sacerdotes y caballeros celosos" para tra-

(195) Nos inclinamos a pensar en esta razón por el contraste entre la proliferación de este tipo de noticias en 1932 y su práctica ausencia en 1931, cuando aún se desconocía la tarea que aguardaba.

tar de la pedagogía aplicada a la catequesis.⁽¹⁹⁶⁾ Siguió a esta la reseña del "movimiento catequístico en la Diócesis", publicada por el boletín de Vitoria y en la que se daba cuenta de que la enseñanza del catecismo ("impuesta felizmente, nos atreveremos a decir, por las presentes circunstancias") se había implantado con carácter diario en todas las parroquias, así como del funcionamiento de la escuela para catequistas.⁽¹⁹⁷⁾ El boletín de Málaga recogió, firmada por el propio obispo, la noticia del crecimiento del movimiento catequístico en la diócesis, resaltando cómo se habían establecido en numerosas parroquias sesiones diarias a horas compatibles con la escuela, el hecho de que "los mismos padres, tomando todo lo en serio que la cosa pide, están llevando ellos mismos de la mano a sus hijos o la Catequesis de la Parroquia..." -dato que no deja de contrastar con la opinión que el arzobispo ILUNDAIN tenía de los fieles de su archidiócesis- y la descripción -quizá para que sirviera de modelo, aunque no lo indicaba- de la catequesis que, para niños y niñas, se impartía en el seminario.⁽¹⁹⁸⁾ El boletín de Tuy comentaría, a su vez, la fiesta catequística celebrada por los niños de Teis, destacando como a pesar de ser un acto dedicado a ellos, habían asistido muchos adultos, por lo que el coadjutor pasó a dirigirles la palabra "ponderando el valor moral de la educación religiosa y fustigando el intento sectario de la educación laica"; este mismo número incluiría la descripción de la comunión pascual realizada por los niños de Bella-Vista e impartida por el obispo así como el texto del

-
- (196) 25-31 de enero de 1932, "Semana catequística", BOE de Sevilla, año 75, 8 de febrero de 1932, núm. 1199, págs. 79-81.
- (197) s.f. "Movimiento catequístico en la Diócesis", BOE de Vitoria, año 68, 15 de abril de 1932, núm. 9, pág. 240.
- (198) s.f. "Sube la ola catequística", BOE de Málaga, año 65, 15 de abril de 1932, núm. 4, págs. 103-105.

escrito dirigido por las madres de familia de Freijeiro al alcalde de dicha localidad en solicitud de que recabara al ministro de Instrucción pública que en las aulas volviera a presidir el crucifijo y que a sus hijos se les enseñara la doctrina cristiana.⁽¹⁹⁹⁾

Al hacer la reseña de la conferencia pronunciada el 15 de abril por el padre Enrique HERRERA en Segovia, (en la que expuso la doctrina católica sobre la escuela única y la actitud de los diferentes Estados de Europa tanto ante ella como ante la coeducación, señalando que su introducción en España era debida a la labor iniciada en las logias de París y criticando la actitud y medidas adoptadas por el gobierno español), no dejaba de resaltar el cronista del boletín de esta diócesis, en línea con ese deseo de estímulo y de dar razón de la vitalidad del catolicismo a que antes hemos aludido, como, a pesar de que la propaganda de la conferencia solo había sido efectuada durante un día, el teatro donde se celebró "estaba lleno y muchísimas personas no pudieron entrar por el agotamiento de localidades".⁽²⁰⁰⁾

Reseña similar haría, ya en el mes de diciembre, el boletín eclesiástico de Tortosa al referenciar la conferencia pronunciada por José M^{re} MAYANS, conde de Irgóna y presidente de la "Confederación de Padres de Familia", resaltando que "la concurrencia de gentes de todas las clases sociales, no obstante la fuerte lluvia... fue numero-

(199) s.f. "Crónica diocesana", BDE de Tuy, año 73, 15 de abril de 1932, núm. 7, págs. 129-131. Ver el apéndice núm. 20. Corrobora esta noticia las afirmaciones del obispo de León en similares hechos, que también hemos visto comentados por UNAMUNO.

(200) 15 de abril de 1932. "La escuela única. Conferencia del Padre Enrique Herrera", BDE de Segovia, año 77, 30 de abril de 1932, núm. 8, págs. 196-202.2

sísima". Iras destacar el papel de la familia cristiana en la sociedad, el conferenciante había centrado su exposición en el tema de la enseñanza tratando de los peligros que encerraba la de carácter laico y remarcando los deberes y derechos de los padres en esta cuestión así como los de la Iglesia, insistiendo en como debían aquellos luchar "por la defensa de la enseñanza cristiana en todos los centros docentes" y por "conseguir del Estado la formación de presupuestos proporcionales" frente al "abuso" de obligar a que los padres católicos "contribuyan con su dinero a la descristianización de sus propios hijos, pagando a los maestros laicos".⁽²⁰¹⁾

El boletín de la diócesis de Oribuela publicó, por su parte, la crónica de la apertura de las escuelas de religión instauradas por el Dr. IRASTORZA y los actos que, con este motivo, se celebraron, destacando el cronista que "dado el profundo sentimiento cristiano que distingue a esta noble ciudad", abrigaba la esperanza de su éxito, esperanza que se había visto desbordada por la realidad puesto que habían acudido tres mil niños a estos actos aparte de numerosos adultos; el obispo había dado la comunión a más de dos mil niños y había hecho en nombre de todos ellos la promesa de asistir a las escuelas de religión creadas. La reseña acababa informando de la "extraordinaria concurrencia" que se estaba dando en ellas, tanto por parte de los niños y niñas como por la de los catequistas que, por su lado, asistían al curso de pedagogía catequística y aludiendo, finalmente a la catequesis ejemplar que se venía impartiendo

(201) 17 de diciembre de 1932. "De Acción católica: El Conde de Triguera, Presidente de la Confederación de Padres de Familia en España, da una conferencia en Tortosa," BOE de Tortosa, año 74, 31 de diciembre de 1932, núm. 22, págs. 181-184.

en la parroquia del pueblo de Monovar.⁽²⁰²⁾

Fue tema relevante en la asamblea del clero diocesano de Oviedo, celebrada los días 10 a 12 de mayo, el de la catequesis parroquial y los asistentes a ella explicaron las distintas formas en que habían procedido a implantarla en sus respectivas parroquias a causa del poco tiempo que constituía la hora semanal dominical -"máxime teniendo en cuenta que cada día es menor el interés que se toman los padres por la formación religiosa de sus hijos y que la enseñanza oficial ha descartado la religión de sus escuelas, haciéndose enteramente laica"- . Así, uno había conseguido que varias familias acogieron a un grupo de niños a su salida de la escuela y, después de darles de merendar, les enseñaban el catecismo; otro había creado "escuelas parroquiales graduadas"⁽²⁰³⁾ con la ayuda económica de varias personas... exponiendo todos los distintos procedimientos utilizados para la catequesis, a la que dedicaban dos o tres días semanales; habiéndose procedido a nombrar por los que regentaban las parroquias más diseminadas, "catequistas de barrio", que reunían a los niños después de la escuela.⁽²⁰⁴⁾

En la reseña de la reunión de catequistas que tuvo lugar en el palacio arzobispal de Sevilla, dió el boletín de esta archidiócesis la noticia de la asistencia, en unión de la "Junta Diocesana para la enseñanza del catecismo", de las trescientas cincuenta catequistas que ayudaban a los sacerdotes en la catequesis dominical, -implantada en todas

(202) 18 a 24 de abril de 1932, "Inauguración de las escuelas de religión, Semana infantil.- Apertura de escuelas", BDE de Orihuela, año 51, 2 de mayo de 1932, núm. 7, págs. 196-198.

(203) No se explica en la crónica qué enseñanzas se impartían en tales escuelas, por lo que no cabe dilucidar si con ellas se pretendía sustituir o complementar la enseñanza oficial.

(204) 10-12 de mayo de 1932, "Asamblea del Clero Diocesano. III, Catequesis, Acción Parroquial...", BDE de Oviedo, año 68, 1 de junio de 1932, núm. 9, págs. 118-121.

las iglesias de la ciudad- y semanal, la cual funcionaba en "su casi totalidad".¹²⁰⁵ Tras esta noticia publicaba el mismo toletán, en el mes de septiembre, la memoria de la labor realizada por la Junta diocesana desde su constitución y la cual había sido leída en la reunión anteriormente descrita. En ella se señalaba la importancia del catecismo para la fe, razón del interés de la Iglesia en que este no faltara a los fieles desde su infancia, de ahí que se hubiera celebrado una "semana catequística" en el mes de enero, que se hubiese reorganizado la Junta y que el prelado se hubiera reunido con esta en febrero comunicándole el programa que había de seguir para el reclutamiento y formación de grupos de catequistas; de ahí, también, las clases "trisemanales" en todas las parroquias para los niños de las escuelas nacionales y las fundación en aquellas de la "Asociación de la Doctrina Cristiana". Para cumplir todos estos encargos del prelado, la Junta había enviado una encuesta a todos los parrocos, formando listas y grupos de catequistas, "singularmente del devoto sexo", y realizado un censo de todas las escuelas de la capital con el fin de estudiar el establecimiento de centros catequísticos. El prelado, por su parte, además de reorganizar la Junta, había dirigido el 7 de marzo una pastoral a los parrocos dándoles normas sobre la enseñanza del catecismo y el 28 del mismo mes había publicado un nuevo reglamento para la catequesis de la diócesis; en igual fecha la Junta había procedido a enviar una circular al clero parroquial¹²⁰⁶ y, más tarde,

(1205) s.f., "Crónica diocesana.- Magna reunión de catequistas en el Palacio Arzobispal". BDE de Sevilla, año 75, de julio de 1932, núm. 1207, págs. 196-197.

(1206) Ya hemos hecho alusión a todos estos extremos. Ver las notas núms. 131 y 133.

había enviado a todos los directores de centros catequísticos el "Himno de la Doctrina Cristiana", adoptado como oficial para la diócesis. Los eclesiásticos de la Junta, en unión, a veces, de "algunos caballeros", habían ido visitando los centros de la capital siendo fruto de todo ello el que en la ciudad de Sevilla se habían intensificado y nutrido de "numerosos auxiliares" las catequesis de los días festivos ya establecidas en las parroquias y sus filiales. Por otro lado se habían organizado las clases "trisemanales" gracias a la cooperación de "unas trescientas veinte señoras y señoritas catequistas y de algunos caballeros y jóvenes", clases que venían funcionando en todas las parroquias y filiales salvo en las que citaba, de las que había que tener en cuenta que si bien aun no habían establecido esta enseñanza tampoco tenían en su demarcación escuelas nacionales y si colegios católicos. Durante la cuaresma en casi todas las parroquias se había dado clase diaria de catecismo, procediéndose a dar especial relevancia a la primera comunión de los niños "celebrada este año con inusitado esplendor en casi todas las parroquias". La memoria daba cuenta de los centros que se destacaban, entre los treinta existentes, por el número de catequistas y alumnos, alabando la labor realizada por aquellas, no solo pedagógica sino "altamente social, educativa y moralizadora", toda vez que, en muchos casos, continuaban su labor fuera del templo poniéndose en contacto con familias modestas y "ejercitando con ellas las obras de misericordia". Respecto a los pueblos indicaba la memoria que de las doscientas treinta y ocho parroquias existentes, ciento quince habían comunicado el establecimiento de la "Asociación de la Doctrina Cristiana" y que, de los veintitrés arciprestazgos, diecisiete habían remitido información sobre las catequesis en sus parroquias. Aludía, por último, a los dos ciclos de conferencias de religión para estudiantes de ambos sexos dados separadamente desde el 1 de marzo hasta final de mayo, a las lecciones de

vulgarización teológica para adultos impartidas en la catedral y a las lecciones prácticas que se dictaban a "un nutrido grupo de señoras y señoritas catequistas". Finalizada agradeciendo la colaboración del clero y seglares en la obra apuntando que "hoy como ayer, vemos que en los pasos más solemnes de la vida humana interviene siempre la mujer," dado que la difusión del evangelio no se había limitado "ni a las ciencias ni a las artes ni al poder sino al amor." La conclusión que extraía la memoria era que había sido mucho lo hecho pero que aun quedaba una ingente labor pues sólo en Sevilla ascendían a diez mil los niños, según el censo escolar, no educándose aun cristianamente a muchos de ellos.⁽²⁰⁷⁾

Reberaba en el mes de agosto el boletín de la diócesis de Vitoria la fiesta catequística celebrada en Mungua (Vizcaya), "con asistencia de dos mil niños" y organizada para todo el arciprestazgo por la asociación "Jaungoilo kale", que trabajaba para difundir el catecismo "euskertxo".⁽²⁰⁸⁾

(207) 23 de junio de 1932, "Memoria de los trabajos realizados bajo la dirección e impulso de la Junta Diocesana para la Enseñanza del Catecismo durante el primer semestre de 1932, leída en la reunión general de catequistas de Sevilla el día 23 de junio en el Palacio Arzobispal", BOE de Sevilla, 19 de septiembre de 1932, núm. 2210, págs. 239-246. La publicación de la memoria va precedida de la siguiente advertencia que corrobora nuestra hipótesis del principio:

"Por expresa disposición de su Eminencia Rvma. el Señor Cardenal Arzobispo, se publica la presente MEMORIA para que su lectura sirva de satisfacción legítima a los catequistas de uno y otro sexo y de estado para ulteriores trabajos en las catequesis; y para que imiten su celo y abnegación los hasta ahora indiferentes y se multipliquen las catequesis en todas las parroquias y pueblos, aun en los días no festivos."

(208) s.f. "Mungua: Fiesta Catequística". BOE de Vitoria, año 68, 10 de agosto de 1932, núm. extraordinario, págs. 453-454.

La sección "Cronica diocesana" del boletín eclesiástico de Barcelona daba cuenta, por su parte, de la actividad desplegada por el "Comité Catequístico Diocesano" y por el "Comité Diocesano de la Escuela Católica", señalando que aquél estaba procediendo a la realización de una estadística sobre las catequesis existentes en la diócesis y destacando que eran muchas las parroquias que multiplicaban el número de grupos y sesiones mediante el arreglo, en muchos casos, de locales para impartir las lecciones, con independencia de las que se daban en los templos. Dicho "Comité" iba a editar, desde principios de Adviento, una revista: "Formación catequística", que, semanalmente, publicaría artículos de pedagogía e instrucción catequística para adultos, jóvenes y niños. Por su parte el "Comité Diocesano de la Escuela Católica" había convidado "a todos los maestros particulares de la ciudad de Barcelona a firmar unas bases de adhesión en las cuales se comprometían a enseñar la doctrina cristiana y a permitir la entrada al sacerdote, recibiendo en cambio la protección moral y material del Comité, según las posibilidades de que este disponga"; habían respondido a esta invitación hasta esa fecha ciento setenta maestros, lo que hacía que un total de dieciséis mil alumnos recibieran la influencia de las parroquias y de la enseñanza religiosa; para dar el debido apoyo a las tareas de este órgano se había establecido en el palacio episcopal "un Secretariado dividido en diversos Subcomités". El Comité preveía la visita semanal y la declaración del sacerdote que, con carácter fijo, había de supervisar cada escuela; preparaba una asamblea de maestros; el nombramiento de un inspector para informar de las condiciones pedagógicas de las escuelas auxiliadas; asesoraba sobre los trámites necesarios para la erección, traslado o modificación del régimen de las escuelas y sobre sus condiciones legales; estaba procediendo a preparar una campaña de tres meses de duración para divulgar su obra e interesar a la opinión pública y, por último, recogía fondos

económicos, actividad ésta ante la que ya habían respondido numerosos fieles enviando sus donativos. El Comité, no obstante, estaba interesado en llegar a "las clases más modestas", por lo que había hecho imprimir y divulgar unas hojas de suscripción de cinco pesetas mensuales, cantidad necesaria "para defender un niño de la absorción de la enseñanza laica". La reseña finalizaba aludiendo a la creación, en cada parroquia de la ciudad, de un "Comité Parroquial" que, en contacto con el diocesano, tenía a su cargo la labor informativa y de propaganda en su ámbito, la adhesión de los maestros, la distribución de los alumnos y la captación de recursos económicos, que debían ser enviados al Comité diocesano para su distribución.⁽²⁰⁹⁾

Otra diócesis catalana, la de Girona, publicaría dos meses más tarde los actos celebrados en ella para la difusión de la catequesis. Con motivo de los cuales se había desplazado a la capital el administrador apostólico. Tales actos habían consistido en un "triduo catequístico" para adultos y distintas conferencias así como en reuniones piadosas para los niños y niñas de las catequesis. Reseñaba el cronista que a ellos habían asistido numerosos fieles a los que se había exhortado a colaborar en la enseñanza del catecismo. Paralelamente se había celebrado una asamblea de sacerdotes en la que se procedió a leer la memoria de las actividades catequísticas de cada parroquia, asamblea en la que se adoptaron las siguientes conclusiones: continuidad de la catequesis dominical; confección de un censo de los niños de cinco a catorce años de la ciudad; recomendación de la enseñanza diaria del catecismo en los colegios de comunidades religiosas y en las escuelas no oficiales; enseñanza del catecismo a los alumnos de escuelas públicas durante tres días a la semana en locales adecuados y predi-

(209) s.f. "Crónica diocesana.- Actividad catequística", BDE de Barcelona, año 75, 17 de octubre de 1932, núm. 19, págs. 393-397.

cación catequética en las misas con mayor concurrencia de fieles." (10)

Por último, el boletín diocesano de Madrid-Alcalá incluía la noticia, ya en el mes de marzo de 1933, de los acuerdos adoptados el 15 de diciembre anterior por el cabildo catedral, acuerdo que se cenía a: establecimiento de una catequesis en la propia catedral, predicación catequética en las misas de mayor concurrencia de fieles y organización de cursillos de cultura religiosa para adultos. En la fecha de su publicación indicaba el relator que los tres acuerdos se habían llevado va a la práctica a tenor del reglamento aprobado por el obispo, que publicaba a continuación, y en el que se especificaba el contenido que habían de tener las clases, su horario para niños y niñas y el programa de los círculos de estudios para jóvenes y de los cursillos de cultura religiosa para adultos, de los que había comenzado a funcionar el destinado a caballeros. (11)

(10) 9, 10 y 11 de diciembre de 1932, "Tricuo catequístico y residencia del Rmo. Sr. Administrador Apostólico en la capital de la diócesis", BOE de Gerona, año 76, 31 de diciembre de 1932, núm. 14, págs. 354-357.

(11) 15 de diciembre de 1932, "El Cabildo Catedral funda una catequesis y organiza Cursillos de Cultura Religiosa", BOE de Madrid-Alcalá, año 48, 1 de marzo de 1933, núm. 1578, págs. 93-96. Esta noticia ha de complementarse con otra aparecida en "El Debate", pero no en el boletín eclesástico, que aludía al establecimiento por el consejo diocesano, bajo la presidencia del obispo, de varios centros destinados a ambos sexos a fin de que los alumnos de los institutos de segunda enseñanza pudieran asistir, a horas compatibles, a clases de religión y moral ("El Debate", 30 de octubre de 1932). En relación con esta noticia ver más adelante la pastoral del Dr. EIJÓ y GARAY de 20 de agosto de 1933.

15. 1933. La continuidad en las líneas de la organización eclesiástica de la enseñanza religiosa y de exhortación a la actuación de los fieles, enero-marzo: obispados de Zamora, Santiago, Tenerife, Zaragoza, Vitoria, Orense, Urgel y Málaga.

Aprobadas las actas de la conferencia de metropolitanos del mes de noviembre⁽¹²⁾ y dada la importancia que en esta ocasión se dió en ella el tema de la enseñanza religiosa, los prelados que durante 1932 no habían procedido a dictar normas sobre su organización en sus respectivas diócesis, procedieron de inmediato a realizarlo. Junto a sus escritos figuraran en este período normas o exhortaciones concretas de actuación por parte de los prelados que el año precedente ya habían suscrito las pertinentes orientaciones y establecido las correspondientes directrices.

El Dr. Manuel ARCE OCHOTOREMA era uno de los prelados que había guardado silencio sobre la cuestión que nos ocupa y fue el primero que entre los consultados, procedió, en enero de 1933, a dirigirse a los fieles a fin de exhortar-

(12) Así lo comunicó el nuncio Tedeschini al cardenal VIDAL -que las había remitido al Vaticano el día 9 de noviembre, tras la inmediata finalización de la conferencia- por carta de 19 de diciembre de 1932. El arzobispo de Tarragona procedió a enviarla a los metropolitanos y, por su medio a todos los obispos, el 2 de enero de 1933. (*Esglesia i Estat durant la segona...* III, págs. 430-435; 498 y 616).

les a la creación de centros de enseñanza católicos.⁽²¹³⁾

Así, tras analizar los embates que se dirigía contra la institución de la familia -entre los que destacaba el matrimonio civil- criticaría las diversas corrientes del pensamiento de la época señalando que la única forma de luchar contra todos sus errores era el estudio de la doctrina cristiana, del que eran especialmente responsables los padres de familia. Mas el problema de alcanzar una sólida formación religiosa solo tenía dos soluciones, a juicio del prelado: o la enseñanza oficial respondía a esta necesidad o los padres habían de organizar centros de formación que garantizaran la educación cristiana de sus hijos; dadas las leyes vigentes solo existía la segunda solución, la cual tenía que desarrollarse por medio del esfuerzo colectivo e integrado en la "Asociación de Padres de Familia".⁽²¹⁴⁾

Sería el arzobispo de Santiago el único prelado que en todo el periodo examinado y como actuación concreta y complementaria de las ya dadas, instaría a los directores de los colegios de su diócesis a inscribirse en la "Federación

(213) Inicia, no obstante, la serie de documentos sobre enseñanza religiosa de este año un escrito del obispo de Vich y administrador apostólico de Gerona, Dr. Juan PERELLO y POU. Se trata de una breve circular en la que "ante los esfuerzos que se vienen realizando en España para extender y arraigar la escuela laica" pedía la celebración en todas las parroquias de las diócesis de una misma comunión general de todos los niños acompañados de sus padres, el día de la purificación de la Virgen, para intentar "que continúen abiertas las escuelas católicas en toda las poblaciones de España a fin de que se conserven incólumes la fe de los pequeños y la pureza de sus costumbres". 14 de enero de 1933, "Circular num. 2", BOE de Vich, año 79, 16 de enero de 1933, num. 2113, pág. 29 y 21 de enero de 1933, BOE de Gerona, año 77, 25 de enero de 1933, num. 1).

(214) 24 de enero de 1933, BOE de Zamora, año 70, 16 de enero de 1933, num. 2, págs. 17-27.

de Amigos de la Enseñanza" no solo porque, a su juicio, esta asociación "es y será, ... firmísimo baluarte de la instrucción religiosa" sino porque, "y aquí esgrima un indudable criterio político" "poco o nada valen los esfuerzos aislados en esta época, en que todas las fuerzas aines se dirigían estrechamente unidas al logro de sus ideales", amén de que de esta forma se lograba "asegurar mas provechoso éxito a la labor personal que en este sentido queremos desarrollar." A tal fin publicaba una carta dirigida por la Federación en la que esta explicitaba las actuaciones realizadas desde su creación en uno de sus

- (215) La Federación de Amigos de la Enseñanza había sido fundada en 1930 por el jesuita Enrique MÉRREIRA ORIA, hermano de Angel Herrera, tenía como cometido la defensa y difusión de la enseñanza católica y su actuación fue muy valorada por la jerarquía; uno de sus objetivos era la creación de una Universidad católica, proyecto que se prolongó durante toda la República sin llegar a prosperar.

(*España y Eslat durant la segona...*, I, pág. 168, nota 6 y III, págs. 25; 147, nota 2 y 326).

Sobradamente se describen en la carta que en el apéndice reproducimos las actuaciones llevadas a cabo por esta Federación. Entre las notas que, tal como en ella se señala, remitió a la prensa son de destacar la denuncia de separación de sus cargos de maestros y profesores llevada a cabo por el Ministerio de Instrucción Pública respecto a varios de ellos ("Una política escolar iconoclasta sin par en Europa", "El Debate", 18 de diciembre de 1932) tema en el que, en diversas fechas, insistiría el periódico denunciando, por otra parte, lo que a su juicio eran privilegiados nombramientos de ciertos maestros aines a la ideología republicana ("La revisión del profesorado", 11 de marzo de 1933; "Un privilegio abusivo", 17 de agosto de 1933; "Aun queda más", 15 de noviembre de 1933) y la oferta efectuada a todas las escuelas y colegios católicos en agosto de 1933 por la que, ante la proximidad del curso académico, ponía a su disposición "información de profesorado no oficial, aunque si titulado, tanto para la enseñanza primaria y media como superior y escuelas especiales" y facilitando también a los padres católicos "informes sobre profesores particulares, colegios, residencias de estudiantes y demás centros de enseñanza católica", ("La enseñanza católica, Ante la próxima apertura de curso", "El Debate", 30 de agosto de 1933).

- (216) Ver el apéndice núm. 21. No hemos encontrado esta carta, como sería de esperar al estar dirigida, al parecer, a todos los miembros de la jerarquía, en el archivo de VIDAL y BARRAQUER.

principales empeños, que era el de que "la educación dada por la Iglesia se elevara lo mas posible, para que supere siempre a la inculcada por la Institucion Libre", objeto para el que, precisamente, se habia creado dicha Federacion. Como complemento de esta carta destacaba el arzobispo como en las circulares que habia dirigido a los fieles de su diocesis habia puesto de relieve

"...la importancia que para el triunfo de nuestra religion y, por consiguiente, para el bienestar de los pueblos, tiene la enseñanza religiosa. No hemos dudado en afirmar que sin instruccion religiosa no sera posible grabar en el alma de los hombres los principios que han de llevarle a la consecucion de su felicidad temporal y eterna, ni sabrán nunca librarse de los apetitos desordenados, de sus malos hábitos, de las malas inclinaciones de su naturaleza, que forzosamente han de enturbiar la serenidad de su entendimiento y debilitar el vigor de su voluntad, y hacer así imposible el cumplimiento de los deberes para con Dios, para consigo mismo y para con la sociedad."

Por ello consideraba de la mayor importancia que en todos los Centros de enseñanza, tanto elemental como superior, se impartiesen todas las disciplinas con sujecion a los principios de la doctrina catolica, razon por la que elogiaba "a cuantos trabajan por lograr estos fines, por depurar de errores morales los libros de texto, por formar maestros de solida doctrina científica y religiosa, y por conseguir para los Centros de enseñanza catolica (entre los que se encontraba la Federacion de amigos de la Enseñanza) los mismos auxilios -o, por lo menos, el mismo respeto- que el Estado dedica a otros centros de enseñanza laica". A continuacion de su escrito hacia insertar el arzobispo el boletin y cuotas de suscripcion a la misma a fin de que los directores de los Colegios de la diocesis procediesen a aso-

ciarse a ella.⁽²¹⁷⁾

Bajo el título "Lo que más nos urge" y sin fecha ni firma alguna, publicaría el boletín eclesiástico de la diócesis de Granada un breve texto en el que se señalaba que junto a la triste realidad de ver a tantos sin medios económicos, de mayor gravedad era ver la ausencia de conocimiento de la doctrina cristiana, sobre todo en los niños: de ahí que aun siendo los padres de familia los llamados en primer lugar a educar religiosamente a sus hijos, si no lo hacían, "como desgraciadamente acontece", eran los sacerdotes los que debían proceder a ello y, a tal fin, daba diversas indicaciones para que pudieran impartir con fruto la catequesis, exhortándoles a buscar y atraer a los niños y a ocuparse de ellos, aparte de por la necesidad de formarlos sobrenaturalmente, porque "los trabajos al niño prodigados en más de una ocasión servirán para cautivar el corazón de los padres, y en consecuencia, aun para ganarse la ayuda de los mismos mediante la limosna". Los sacerdotes, en definitiva, tenían que trabajar sin descanso para buscar a los rielos y a sus hijos a fin de instruirlos en la fe, con lo cual obtendrían la debida recompensa ya que "¿será posible que un sacerdote así no asegure, justamente con una decorosa sustentación, el progreso de su alma en virtud creciente hasta impetrar de la misericordia divina su perseverancia final que desemboca en la gloria eterna?".⁽²¹⁸⁾

(217) 15 de enero de 1933, "Circular a los Directores de Colegios y Escuelas Católicas de la Diócesis", BOE de Santiago, año 72, 15 de enero de 1933, núm. 2688, págs. 6-10.

(218) s.t. "Lo que más nos urge", BOE de Granada, año 88, 15 de enero de 1933, núm. 3517, págs. 2-7, También en BOE de Valencia, 15 de febrero de 1933, núm. 2165, págs. 60-62.

Hasta finales de enero de 1933 no suscribiría el Dr. Albino GONZALEZ MENENDEZ-REIGADA, obispo de Tenerife, una pastoral tratando el tema de la instrucción religiosa, pastoral con la que, precisamente, iniciaría y culminaría las palabras dirigidas a sus fieles sobre este tema en todo el periodo examinado, y a fin de dar, mediante ella, las instrucciones necesarias para la organización de la enseñanza de la catequesis en su diócesis. Aludía el prelado en su escrito a como en los tiempos pasados el ambiente social era "favorable generalmente a la religión" y aunque de sus frases no se desprendía que tal ambiente fuera precisamente encomiable, tampoco encerraban queja alguna de una realidad que, en todo caso, parecía preferir a la que ahora lamentaba. Señalaba, así, el obispo tinerfeño que aquella religión "con poco esfuerzo seguía viviendo en los pueblos con una vida mas o menos rutinaria y lánguida", mas ahora tal situación había cambiado y "todo es contrario a Dios, proscrito de todo lo oficial, como para dar a entender que ni en su educación y preparación para la vida ni en la vida misma jurídica y social necesita de Dios el hombre para nada", actitud que era para el obispo "la proclamación auténtica de un nuevo paganismo que con el apoyo oficial por todas partes se infiltra y se respira". Y como el ser humano necesitaba muy poco "para dejarse llevar de lo que balaga sus mas bajos instintos" siendo preciso por el contrario, mucho esfuerzo para enderezarle por el camino positivo, era necesario "hoy mas que nunca" que "la Iglesia y todos los católicos verdaderos" se preocuparan de extender la enseñanza de la religión. Enseñanza que no se impartía en

las familias ni en las escuelas donde, incluso, "con una neutralidad e indiferentismo hostil", se tendía a provocar "una prevención y como repugnancia y desprecio...", tampoco se decía en los institutos ni en las Universidades "donde sistemáticamente se rehuye, cuando no ocurre algo peor, dar importancia a cuanto a religión se refiera" y, contrariamente, todo cuanto se difundía por los distintos medios era hostil a ella, "diabólicamente ordenado a arrancar de las almas sus últimas raíces".

Por ello era necesario realizar un gran esfuerzo al objeto de dar a conocer el evangelio -que los mas rechazaban por ignorancia- por todos los medios de difusión posibles; esfuerzo que deberían compartir todos los creyentes de la diócesis en un momento en que se estaba librando "una batalla entre los ejércitos de la luz y los ejércitos de las tinieblas, acaso la mas formidable que han presenciado los siglos"; y, a fin de encauzar este esfuerzo, dictaba unas "ordenaciones, que no son todo lo que pensamos y queremos sobre la materia, pero cuya realización es ya demasiado urgente para que pueda mas retrasarse" y, así, esperando poder proponer en breve un texto de catecismo oficial para la diócesis, establecía, por el momento, la organización de la "Cofradía de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias, así como la catequesis, solo dominical, en todas ellas y en las ermitas o locales donde hubiera un núcleo de población que no pudiera ser atendido en otra forma; en estas catequesis deberían colaborar no solo los fieles sino, sobre todo, las ordenes religiosas, que la impartirían en sus respectivas iglesias o capillas o en las barriadas menos atendidas; la catequesis, por ultimo, debería pasar a impar-

tirse diariamente durante el tiempo de Adviento y Cuaresma.

Pastoral encaminada a orientar y estimular a sus diocesanos sobre los deberes que su religion les imponia en materia de ensenanza, para lo que se apoyaba en una tremendista descripcion de la situacion socio-politica que se vivia en España, fue la que dicto con motivo de la cuaresma el Dr. Rigoberto DOMANECH VALLS, arzobispo de Zaragoza.

Su escrito se iniciaba declarando a los fieles que la mayor de sus inquietudes -"con ser muchos los motivos de preocupacion y ansiedad que embargan nuestro animo en la hora presente"- giraba en torno al porvenir de sus hijos, cuya suerte, pese a las adversas condiciones que por doquier existian, dependia de lo que los padres quisieran hacer, ya que no podian olvidar que "una educacion cristiana, una instruccion solida en escuelas catolicas, pueden y deben despejar la incognita".

En linea con esta argumentacion no dudaba el prelado (sin entrar en absoluto a enjuiciar la actuacion de la propia Iglesia, a la que solo aludia destacando las persecuciones que en etapas anteriores habia sufrido), en señalar a los culpables de los males que se padecian: los padres de familia, que en ese pasado inmediato "con inconsciencia inexplicable se desentendieron de la educacion de sus hijos", esa y no otra habia sido la causa de que se formaran "esas generaciones arrivistas, revolucionarias, sin con-

(219) 30 de enero de 1933. "Exhortación pastoral". RGE de Tenerife, enero y febrero de 1933, núms. 1 y 2, págs. 1 a 11.

ciencia y sin freno, a ratos frenéticas, a ratos inquietas y amotinadas, siempre hostiles a los de arriba".

Para cambiar esta situación, y si no se quería "sucumbir a la irrupción devastadora, cada vez más ingente, de masas enloquecidas", preciso era modificar esta conducta, debiendo entender los padres que la primera formación moral de los hijos (formación que, desde luego, el arzobispo identificaba con las enseñanzas de la religión católica) era irrenunciable para ellos, siendo esta una parcela de la educación que no podían confiar a manos ajenas pues si así hicieran "cometeran un crimen, una abdicación de su paternidad, una mutilación y deformación de los hijos...", tarea que reexpresara el prelado, a pesar de su sola alusión a la "paternidad"- incumbía tanto al padre como a la madre según sus diversas funciones y que sólo supletoriamente correspondía a "a los maestros y a los inspectores de Colegios", cuyas enseñanzas nunca serían eficaces si no contaban con la debida actuación familiar.

Si siempre era necesario vigilar la educación de los jóvenes, ello se hacía especialmente relevante en esos tiempos "cuanto más han aumentado las ocasiones de naufragio moral y religioso", no siendo lícita en este sentido ninguna inhibición, bajo riesgo de los temibles males que auguraba, pues "En los hogares donde se omiten y atropellan tan inviolables deberes, la desobediencia, el descoco, la precoz depravación y tal vez la criminalidad de los hijos no tardan en vengarse cruelmente. Luego vienen quejas, lamentos, gemidos estériles; la ruina está consumada; toda reparación es inútil y tardía".

Tal formación moral debía complementarse con los debidos conocimientos religiosos que informaran a niños y jóvenes de las razones y motivos de sus creencias; de ahí que, prohibida tal enseñanza en los centros oficiales, hubieran de organizarse "otros centros en los cuales se administre la cultura religiosa"; tales centros serían las escuelas privadas y parroquiales y los colegios y academias católicas, a los que debían ayudar especialmente los padres de familia puesto que para la recta formación de sus hijos no bastaban las enseñanzas de la catequesis: "humanamente la conservación del Catolicismo está vinculada a la enseñanza de la verdad religiosa en las aulas y en instituciones de cultura".

Todos los problemas que padecía España -y que el arzobispo enumeraba prolijamente-⁽²²⁰⁾ giraban, precisamente, en torno a la cuestión escolar y serían resueltos según se resolviera aquella:

"Si prevalece la enseñanza católica, volverá a florecer la moral cristiana y será guía de las multitudes, se afianzará el orden social, sufriendo transformaciones inevitables y justas, pero consolidándose los pilares eternos de la familia, la propiedad, la autoridad y el derecho, sin los cuales las agrupaciones humanas son rebaños indisciplinados; renacerá la confianza reconciliando a los hombres entre sí y llevando a la práctica las normas de la justicia y de la caridad dictadas por la Iglesia para que regulen las relaciones entre el capital y el trabajo, y resurgirá finalmente la Religión con una mayor fe de los fieles en la Providencia tras los disturbios pasados, con una conciencia iluminada y reflexiva de los deberes presentes, de los deberes

(220) Ver el apéndice "Los documentos de carácter genérico de la jerarquía en 1933".

intelectuales, de los deberes sociales, de los deberes cristianos; con un criterio sobrenatural que informe los actos y de coherencia y tenacidad a la conducta; con un vigor divino y regenerador porque los dos talleres donde se forjan las almas, a saber, la Iglesia y la escuela o el Colegio católico, no son fábricas solamente de técnicos, sino fábricas de hombres, de cristianos y seguidores de las máximas del Evangelio."

Todo ello era responsabilidad singular de los padres de familia, mas los católicos todos y las entidades y asociaciones religiosas no podían dejar de cooperar, "en segundo término", para asegurar el funcionamiento de los centros católicos, tal como establecía el Derecho canónico, toda vez que tenían una finalidad de carácter social que incumbía a toda la colectividad de fieles, los cuales debían estrechar mas los solidarios lazos propios de la Iglesia ante "las inquietudes y turbaciones actuales" y en pro de la enseñanza católica, "baluarte firmísimo de la vida misma de la Iglesia".

Los donativos y desvelos que se hicieran por tal enseñanza debían, por último, venir acompañados con las mortificaciones y penitencias de la Cuaresma, mas no solo eso: "algo mas, bastante mas demandan hoy nuestro honor y dignidad; reparacion de males, defensa de los derechos sagrados, adopción de medios que impidan o aminoren las devastaciones futuras".⁽²²¹⁾

(221) 10 de febrero de 1933, "Exhortación pastoral con motivo de la Cuaresma", BDE de Zaragoza, año 72, 1 de marzo de 1933, núm. 5, págs. 65-74.

Prosiguiendo las directrices dadas el 8 y 9 de octubre de 1932 dictaría el Dr. MUGICA nuevas orientaciones en 20 de febrero de 1933, las cuales se cenían, esencialmente, a la necesidad de instruir frecuentemente a los fieles de acuerdo con las palabras de la pastoral que había publicado en aquellas fechas y que mandaba que les fuera nuevamente leída; a la designación de un director diocesano, como delegado suyo, para las obras de creación o funcionamiento de las escuelas católicas en las tres provincias de la diócesis y para los fines fijados en el reglamento dictado; al establecimiento de las fechas y forma en que debería organizarse la colecta para las citadas escuelas, así como todo lo relativo a mandas o donativos; a la designación de los "caballeros católicos" que pasarían a integrar las respectivas "Comisiones Provinciales Diocesanas" y al mandato de que en todas las escuelas católicas de la diócesis se recitara diariamente la oración que publicaba para el fomento de dichas escuelas, oración que, indulgenciada por la Sagrada Penitenciaría, tan sólo hemos visto ordenada por este prelado.⁽²²²⁾

Al igual que los obispos de Zamora y Tenerife, el Dr. Florencio CERVINO GONZALEZ, prelado de la diócesis de Orense, había guardado silencio sobre el tema que nos ocupa a lo largo de 1931 y 1932; sería, sin embargo el que, en 1933, escribiría una de las más extensas pastorales que, junto a las de los Drs. GOMA Y y PARRADO, publicaría la jerarquía sobre la enseñanza durante el primer bienio y en la que, en una serie de interminables y farragosos párrafos

(222) 20 de febrero de 1933, "Obra diocesana de las Escuelas Católicas. Advertencias y Mandamientos importantes sobre Escuelas Católicas". BOE de Vitoria, año 69, 1 de marzo de 1933, núm. 5, págs. 96-99. Ver el apéndice núm. 22,

iria exponiendo la doctrina de la Iglesia para argumentar, una vez mas, que sin ella no habia salvación posible, ni individual ni socialmente, y para acabar proclamando, en consecuencia, la necesidad de instrucción religiosa, a cuyo fin venia a dictar ahora las normas de organización en la diócesis.

No se privaria el Dr. CERVINO en sus prolifos razonamientos de hacer incluso una referencia de indudable cariz positivo a la denodada institucion monarquica ni de calificar con los mas duros epitetos la politica del nuevo regimen. Lo aislado de su frase sobre la caida del trono y la frecuencia con que en tonos, si no tan duros, si similares, se venia refiriendo la jerarquia a la actuación estatal, serian probablemente la causa de que -a diferencia de lo sucedido con otros prelados en otros contextos- no hubiera reaccion oficial alguna ante esta pastoral. Amen de que no cabia esperar, indudablemente, que las palabras de un obispo de Orense tuvieran el mismo peligro de resonancia que las pronunciadas por el ex-primado de España. Junto a ello es relevante destacar que es el Dr. CERVINO el único prelado que en todo el periodo examinado llega a condenar lo que denomina "liberalismo catolico", igualando sus consecuencias con las del ateismo y el laicismo, lo que en union del estilo y del contenido, prolijo en condenas y anatematizaciones, de la pastoral, la hacen parecer un documento mas propio de la Iglesia dieciochesca que de la del siglo XX.

Comenzaba su escrito el obispo identificando los conceptos de paz y orden para apuntar que solo en la religion catolica podian darse ambos verdaderamente por lo

que debia ser conocida y aceptada por toda la sociedad, razon por la que "el pretender condicionársela, violentársela o privarle de ella, constituiria... el más injusto atropello y la más dura y cruel de las tiranias". Mas a la fe y paz divinas "asesta hoy todos sus golpes para llevarnos al caos y desorden final, el laicismo brutal y ateo que logro dominar en España".

"En verdad que todavia la revolucion... ha tenido poder para derribar un trono que sostenia la tradicion de muchos siglos, el amor de muchas generaciones que le circundaban su sangre y en el que refulgian con resplandores al parecer inextinguibles todos los triunfos y glorias de la patria; todavia el odio del sectarismo que canta ahora triunfador sobre tantos despojos y ruinas no ha extremado su crueldad entre nosotros mandando echar a las fieras los cristianos; se ha contentado con preparar y no impedir el despojo, la brutal profanacion e incendio de los templos, e ir asegurando a fuerza de privaciones, de aislamientos y hambres, la desnutrición y muerte de los que más se han distinguido o quieren distinguirse por su fidelidad a Cristo."

Pero si esta "revolucion" pretendia arrasar todo cuanto en España se debia a la fe catolica "¿llegará a tanto, seratan honda y vasta la catástrofe, tan completo y fatal el triunfo como anuncian y se prometen, y en parte han conseguido ya, todas las sectas masonicas, formidables reservas del infierno por todo el mundo esparcidas y satanicamente organizadas con todo el poder y odio de que el mismo infierno las arma contra nuestra Santa Madre Iglesia y su Evangelio". Esto, dira inmediatamente el obispo, nunca por-

dría suceder porque la oración de los católicos españoles "armaran el brazo del Omnipotente para aniquilar de hecho y repentinamente, cuando menos se crea, como prometió el Corazón de Jesús a su predilecta hija María Ráfols,"⁽²²³⁾, a todos los enemigos de nuestra fe, con ser tantos y tan poderosos y soberbios."

Mas para lograr que ello sucediera era preciso el esfuerzo de todos, siempre bajo las directrices marcadas por la Iglesia, de la que no cabia separarse ni discrepar.

"No ha opinado así el Liberalismo que para mejor engañar se apellidó Católico, ni las múltiples herejías -laicismo, racionalismo, materialismo, etc.- que de aquel funestísimo error nacieron y la Iglesia oportunamente ha condenado; demostrándose ahora por los mismos hechos cuanto había en semejantes herejías de infernal y satánico, pues que sus naturales frutos y derivaciones lógicas son en la actualidad el desquiciamiento social a fuerza de anarquismos, y ya como último y postrer atisimo a que jamás había llegado ningún pueblo idolatra ni tribu salvaje, incluso las que vendían o se devoraban sus propios hijos, ese ateísmo brutal de civilizados, que lo han inventado y defienden por la única exclusiva razón de haber sido liberales, y por la lógica deducción, atendido el espíritu liberal, hombres sin fe, incredulos por necesidad, materialistas por bajeza de instinto, enemigos feroces de toda religión espiritual y mas, naturalmente, de Jesucristo y de su Cruz, y por fin ateos, aunque siempre adoradores de Satanás, a quien rinden culto con todas las concupiscencias de su carne y orgullo de su mente, y cuya imagen tanto ellos como sus mujeres o concubinas suelen llevar al cuello. ¡He aquí los hombres sin fe, nuestros amos crueles, implacables, trituradores de la Historia gloriosísima tradicional de España, divorciados de la espiritualidad y nobleza de su propia alma, y fatal evolución del Liberalismo condenado! *Inimicus homo fecit hoc.*"

(223) Ver la nota 124.

Pero esta "raza de amos y maestros" pasaria a extenderse dada "la alta proteccion, abundancia de medios, libertades y garantias de que dispone... y prohibida como esta oficialmente en nuestros centros y escuelas publicas, nacionales, la pura ensenanza catolica y su defensa, con frecuencia se presentaran en ella, y ya en algunas sucede, segun se Nos informa, en medio de dudas, cuando no de burlas y blasfemias, puntos capitalisimos de inmensa trascendencia doctrinal y religiosa", todo lo cual no podia desembocar mas que en la irreligiosidad y en el futuro ateismo de las gentes asi formadas al margen de las verdades religiosas "cuya ensenanza oficial prohíbe el laicismo imperante, como por mayor respeto a la libertad y a la cultura". Mas si este ateismo asi fomentado hubiera de ser el principio rector de la sociedad que se pretendia crear "¿por que no habia de desaparecer definitivamente de los Codigos humanos el concepto de crimen, ya que nada tan mudable como el criterio del hombre...?"

A esto se llegaria si se intentara suprimir toda formacion religiosa que -en extraña frase discordante con el pensamiento del prelado, que parece querer aludir con ella a la bondad de todo lo creado, pese a sus duras alusiones sobre la maldad de muchos- daba a conocer la ley divina, la cual "conviene de absurdo y criminal, si algo de criminal hay en el mundo, el actual sistema educativo en que se manda prescindir de todo problema religioso". Frente a ello se intentaba ignorar la base de la justicia sobrenatural afirmada en el decalogo, con lo que el obispo esgrimia taimadamente la conclusion de que "...si estos preceptos estorban para formar al hombre, lo contrario a ellos tendra

que ser bueno y lícito en un hombre laico y en una nación de hombres a ese tenor formados, con esa cultura laica; y por consiguiente, bueno y lícito matar; bueno y lícito adulterar; bueno y lícito el hurtar, el calumniar, mentir, odiar al prójimo, etc."

Esto, además, no era invención para el Dr. CERVINO sino reproducción, "en el concepto y en la letra", de la doctrina del laicismo sobre la enseñanza oficial en las escuelas. De todo ello bastó el anuncio -decía en contradicción con lo que acababa de afirmar respecto a la presencia del crimen en el mundo- "para los que ya tenían en el alma semejantes instintos, considerense con derecho (y así debería ser) a su realización e impunidad"; añadiendo para corroborar tal aserto:

"¿Exageraremos si afirmamos a nuestro entender que la criminalidad, los atentados al honor, a la propiedad, a la autoridad y a la vida se multiplican de día en día de una manera aterradora, a pesar del visible aumento, celosa vigilancia y novísimas costosas organizaciones de policías? Si esto es el laicismo y en conformidad con su espíritu ateo y sus doctrinas y leyes anticristianas se forman los ciudadanos, natural es que los frutos, los actos y aspiraciones de estos sean los que tendrán que ser. ¡Horroriza pensar lo que serán cuando en toda su universalidad y plenitud se desenvuelvan de acuerdo con los principios ateos que se le han inculcado en la escuela como base y norma de ilustrada ciudadanía y de los cuales serán expresión y fruto! Si parricidios, incendios, bombas, conspiraciones, sacrilegios, anarquismos ahora, ¿qué será más tarde? ¡Fíjense los que tengan ojos para ver y alma para sentir!."

Frente a todo ello, la fe de Cristo, basada en el amor, la pobreza y la abnegación, que se extendió por todo el mundo por la predicación de los apóstoles, predicación milagrosa al difundirse con casi nulos medios y con fuerzas contrarias, era indispensable, y era necesario predicarla para su conocimiento tal como sucedió en la misma España desde el siglo sexto, en la que:

"Fue preciso llegar, por nuestros pecados, tal vez por nuestras cobardías y vilezas, indiferencias y traiciones, a los tiempos actuales, para ver con nuestros propios ojos y no saber lamentar debidamente la apostasia que acaba de consumarse, no ya de la Religión Católica, cuya enseñanza fue proscrita, sino de toda religión y sobrenatural creencia en otra vida, pues que lo único aquí oficial y permitido en centros y escuelas es el laicismo, o sea el ateísmo frío y asfixiante."

De tal situación ya dio aviso "el sublime Mella", en el Congreso de los diputados en noviembre de 1906, "desbaratando, por lo menos entonces, la vasta conspiración del sectarismo antiespañol contra la enseñanza, influencia y patriotismo de las ordenes religiosas, cuyo amor, interés y sacrificio por la patria que casi por ellas existía quedaron tan de manifiesto."

"Pero ahora no. Ahora se prohíbe esta enseñanza; se pretende cerrar, pese a las anteriores razones, todos los colegios y escuelas dirigidos por religiosos y religiosas, así tengan título oficial, y hasta por simples sacerdotes que por puros sentimientos de caridad y patriotismo, sin

esperar retribucion alguna del Estado a quien por este solo concepto ahorran sendos millones en el presupuesto nacional de Instrucción pública, educaban y hacian brillar aun en las humanas ciencias, a la mayor parte, sin duda, de los niños y jóvenes de la nacion; siendo harto sabido que en los Colegios religiosos se formaron, gratuitamente y todo, varios de los que hoy ocupan los más altos cargos en el actual Gobierno declarado enemigo de esta enseñanza. ¡Mal se concibe, ciertamente, que a tanto pudiera llegar en España el odio a Cristo y su Iglesia!.

«En tiempos como los actuales, en que el egoísmo se impone y lo avasalla todo, y la lujuria hace del hombre rey una bestia inmundada, y la traición seca el remordimiento en todas esas almas viles ¡tantas como son! que no han conocido la gratitud; y el engaño y la mentira con realces de cultura seducen ingentes masas de infelices trabajadores que acabaran forzosamente, a medida que sea desterrada la caridad cristiana e impere la libertad del vicio, que es laicismo sin Dios, en la mas horrible de las esclavitudes y cruel de las desesperaciones, cual es la de tener que morir odiados y perseguidos de los mismos que les engañaron: en circunstancias como las presentes, en que se necesitan heroísmos de virtud, abnegaciones sobrehumanas, almas grandes capaces de dominar con el soberano poder de su voluntad entregada a Cristo todos los perversos instintos de la materia que estallan en revueltas e inundan el mundo de crímenes, es cuando se nos dice: ¡Ahora no!»

Y ello era porque "las constituciones ateas" y "las repúblicas laicas" no transigian con que "todos los padres de familia" prefirieran a los religiosos como maestros de sus hijos y querian las situaciones mas caóticas antes de reconocer el derecho natural de aquellos sobre la educacion de su prole.

"Antes el anarquismo con todos sus horrores, y el analfabetismo con sus desdichas, y la situación violenta de los católicos, sean o no mayoría en la nación, que complacerles en invertir ni aun la milésima parte de su cuota contributiva para instrucción pública en escuelas de su libre elección y agrado. Contribuir al sostenimiento de los centros educativos laicos, sí; es un deber que el Estado impone. Elegir centros confesionalmente católicos, no; es un derecho natural y cristiano que el Estado niega."

Y no dejaba de sorprender que a los religiosos, que eran precisamente los que "mayores garantías ofrecen a los padres católicos para la formación científico-moral de sus hijos", el Estado les prohibiera enseñar; pero esto no era mas que fruto "del funesto liberalismo católico también oficialmente aceptado", el cual, ciertamente, decía, quería la paz, pero no era una paz sobrenatural sino puramente exterior y tornadiza que "llega a muy pocos, a fuerza de engaños y traiciones la mayor parte de las veces, es insegura y acaba pronto", cosa que igualmente ocurría con la iraternidad que propugnaban "todos los sectarios que con el ateísmo o el laicismo simpatizan", toda vez que, frente a ella, utilizaban el progreso científico -como si fuera posible la ciencia sin una verdad en que basarse- para acumular medios que los católicos consideraban beneficios de la Providencia y que ellos utilizaban para la destrucción a fin de imponerse y someter al contrario, lo que hacía ver que la guerra "imperando el laicismo como ya impera, será inevitable", en contradicción con la doctrina y práctica de

la Iglesia. ***

Anatematizados de esta forma y bajo un mismo prisma que excluía matización alguna, tanto el "liberalismo católico" como el ateísmo y el laicismo, posturas las tres de idénticas y honestas consecuencias según el Dr. CERVIÑO, volverá este la vista sobre los fieles para congratularse de su religiosidad y así dirá que le llegan noticias de que "no hay diócesis más tranquila, religiosa y sumisa"; elevando la sumisión, de acuerdo con su tradicional concepto de la religiosidad, a la categoría de virtud cristiana, virtud que hacía que sus diocesanos, según añadiría, sepan conjurar los "disturbios y revueltas a que sois insistentemente inclinados por los que más bien del desorden que del trabajo

(224) Esta premonstrada apreciación del prelado trataba de la situación mundial y no de la específica de España, donde fueron precisamente las derechas las iniciadoras de la guerra civil y, así, diría después:

"No recela publicar la Prensa de todos los vaticios que ya dispone la Química, y consiguientemente las naciones rivales que no se rigen por el Evangelio, de gases tóxicos, incendiarios, bombas y explosivos de irresistible potencia que en breves momentos podrán aniquilar ejércitos enteros, abrasar y arrasar las más grandes ciudades con todas sus murallas y defensas, y aun exterminar totalmente a todos los habitantes de una región por millones que sean y así se ocultan a veinte metros bajo tierra. Pues figuraros, carísimos, lo que serán estos medios, si la guerra estalla, en manos del ateísmo, laicismo o anarquismo sin Dios, que al fin tienen a ser una misma cosa, y todos hablan y llevan con mentira en sus pendones la palabra *fraternidad*.

«En cambio, nuestra Santa Madre Iglesia, cuyo Evangelio y vida es *caridad*, para perdonar injurias y hacer siempre bien a todos, incluso a los *enemigos*, no quiere, ni jamás utilizará semejantes medios de defensa; preferirá morir, segura de que de esta muerte, cruel e injusta, brotará una nueva gloriosísima vida, testimonio patente y milagro evidentesísimo para cuantos tengan ojos y quieran ver, de que si así muriendo triunfa y no hay poder armado que la destruya, es que la Omnipotencia de Dios está con ella. Comparad entonces lo que vale y significa la *caridad*, verdad y virtud de Dios en la Iglesia de Cristo, con lo que vale y significa la *fraternidad*, truto y mentira en el corazón y en los labios de los hombres que se arman para el exterminio de sus hermanos".

Estas palabras no dejan de encerrar un paradójico contraste con la actuación de los católicos españoles en la futura contienda.

y la honradez viven"; pero estos sembraban la provincia -y ello le afligia- de "solicitaciones y propagandas de matiz revolucionario, naturalmente, y siempre anticristiano, como tiene que ser cuando no se acata la doctrina y menos la autoridad y divina misión de la Iglesia y sus sagrados ministros", e inventaban calumnias contra el clero, que si los católicos formados rechazaban, podían no hacerlo aquellos carentes de la necesaria instrucción religiosa "regularmente adquirida en el cristiano hogar y en las escuelas que hasta ahora podían y debían ser católicas, no laicas, y mejor todavía en el catecismo parroquial".

Ante tal situación todos debían examinar su actitud frente a "los demoleedores sectarismos y abominables sentimientos de odio que manifiestamente caracterizan y distinguen a la novísima persecución que padecemos" y preguntarse hasta qué grado habían sabido resistirla o la habían secundado¹²²⁶ o bien hasta qué punto eran cristianos

(1226) Esta colaboración se habría dado siempre que se hubiera procedido en las formas que el prelado describía:

"Los que por voluntad o miedo se apresuraron a arrancar la cruz de donde piadosamente la habían puesto nuestros antepasados como signo real de fe cristiana, de valor carente para ostentarla visiblemente, mientras arrancada no les sea, sobre sus pechos redimidos; los que todavía se oponen, como lo haría cualquier mundano o impio, a cuanto sea oración, penitencia pública o público desagravio al Señor ofendido e irritado por nuestras culpas; los que siguen leyendo y sosteniendo la mala prensa, los cines escandalosos y libros infames en que la blasfemia, el cuento libre, el chiste herético (sic!), la anécdota herética e intencionada, y siempre la impiedad y la lujuria más o menos descaradas según convenga a sus planes destrutinizadores, son el manjar cotidiano que a los lectores se ofrece; todos los que en una u otra forma a tales infamias se prestan claro que fueron y son traidores a Cristo, apóstatas de su moral y de su ley e indignos de llamarse católicos, tal vez ya lo fueran antes de ahora, sino que por cálculos egoístas procuraban ocultarse o mostrarse indiferentes, contentando a todos, aunque sin jamás prescindir de sus apariencias religiosas y cristianas formas, hasta que ahora, en este favorable ambiente de laicismo, descubren francamente, y en esto hay ventajas para la fe, lo que en su interior preferían, que era la irreligión, el ateísmo práctico, la franca y legal justificación de sus codicias en un servilismo estúpido, bajo y cruel a medida que es retribuido".

pasivos que no se ocupaban -como en alguna de las aldeas de la diócesis sucedía ya- de atender a las necesidades de la Iglesia "violentamente privada de todos sus sagrados recursos", lo que era una cuestión íntimamente ligada con la vida de la fe, debiendo ser conscientes de que la "inacción y moral cecidia" y la falta de imposición de la menor violencia conduce a la indiferencia religiosa "que es el más repugnante materialismo a que puede llegar el hombre... laicismo terezo cuyo nombre real, naturaleza y termino, en que esta la suma de todas las humanas degradaciones y envilecimientos, viene a ser, como hemos visto y los impíos pretenderán, el ateísmo práctico"; quienes eso quisieran debían manifestarlo abiertamente y hacer una elección que, en todo caso, sería -duro y simplista deseo que tan solo hemos visto expresado en el Dr. CERVINO- clarificadora para la Iglesia:

"...los que de este valor carezcan y aun sollicitarlo de nuestro buen Dios rehusan, vayanse francamente con Satanás, alistándose en sus negras huestes, para que así sepamos que la separación es clara y el vil enganoso confusionismo ha terminado al fin. Ansiado bien y providencial ventaja que la actual durísima persecución de la Iglesia nos traeria. Tiempo es de que los límites se dibujen, la esencial división entre el bien y el mal se trace clara, sin torceduras ni sombras, y la vean todos. Vayanse al abismo los que por satisfacer sus pasiones, sensualismos y soberbias, lo prefieren y de espaldas a la cruz caminen, e iluminense bañados en fulgores evangelicos, siempre a la cruz asidos, los que de Cristo quieren ser y con su divina verdad santificarse."

Hechas todas estas consideraciones sobre la doctrina de la Iglesia y la, a su juicio, verdadera actitud cristiana, pasaba el prelado a tratar de lleno el tema de la enseñanza religiosa, para ello comenzaba recordando aquella escena evangelica en que los niños se acercan a Cristo, para afirmar que "nunca como ahora se ha impedido tan dura y cruelmente que se acerquen los niños..."

"¡Pobres niños de hoy! Privados y excluidos serán, si el plan diabólico se consuma, de toda amorosa tutela, a título de una emancipación, libertad y cultura que por el hecho mismo de ser irreligiosa, antinatural y violenta, no puede menos de ser tiránica. ¡Y se hablaba de derechos inviolables y de enseñanza libre! ¿Podrá un Estado, por muy laico y poderoso que sea, alegar derechos anteriores y superiores a los de los padres, especialmente si son padres católicos en cuya alma tendrá que resonar imperiosamente la voz de la naturaleza y de Cristo Dios, mandándoles que antes de nada enseñen a sus hijos el bien y el mal que hayan de buscar y huir, inculcándoles religiosidad y obediencia para que sean santos?"

No, dirá y argumentará extensamente: son los padres los responsables de los hijos, y en base a tal responsabilidad nacen las familias y los pueblos, provincias y naciones, de ahí que no cupiera invertir ese orden natural para dar prioridad al Estado. La prioridad estatal sobre los derechos de los padres sería "la máxima de las tiranías", siendo "el colmo de los atropellos, la más barbara y cruel de las tiranías la pretensión del Estado en monopolizar, centralizar la enseñanza hasta el extremo de excluir el de-

recho natural de los padres para la formacion moral y religiosa de sus hijos, trastornando y comprometiendo de este modo los mas sagrados fueros, la paz e intereses de la familia..."

"De donde, entonces, se sigue que no son ni pueden considerarse verdaderas leyes las que respecto de este particular son contrarias a los sacratísimos deberes e imprescriptibles derechos de la autoridad paterna, como lo son todas esas que decretan la 'escuela laica obligatoria'; estatuyendo, a lo mejor, un monopolio antinatural e impudico con libertades que esclavizan a medida que tientan y satisfacen bajos instintos y tienden a ahogar los gritos de toda buena conciencia cristiana imposible de avenirse, a pesar de todos sus sentimientos de religiosa incondicional sumision, a semejante tirania estatal."...

Frente a tal situacion y a fin de conocer la doctrina de la Iglesia, necesaria al hombre para su salvacion, era preciso estudiar el catecismo, unica forma para encontrar el camino de la perfeccion sobrenatural y humana "so pena de no llegar nunca al perfecto acabamiento intelectual y moral del hombre, segun es de advertir en todos los sabios impios que de fe carecen".

(226) Sobre la alusion a la "escuela laica obligatoria" que habia en estas fechas el prelado, debido, sin duda, al proyecto de ley de confesiones y congregaciones religiosas, sigue siendo valido el comentario hecho para la misma frase que figuraba en la pastoral del obispo de Luj de 14 de enero de 1932.

Es difícil imaginar la apoyatura científica del Dr. CERVINO para hacer tan general y rotunda afirmación, pero, a pesar de la razonable sospecha de su carencia de fundamento, no dejaba de tomarla como base para argumentar sobre la falta de visión política de los estadistas de la República, que elegían, de acuerdo con los planes de enseñanza que introducían, hacer una nación cuyos hombres no fueran perfectos como, sin duda alguna para el obispo, habían sido los del pasado.

"Mala medida es, por lo tanto, aun social y políticamente considerada, el suprimir en las escuelas públicas la enseñanza tradicional católica, y con ella el amor y aprecio de la sobrenaturalidad del hombre y los principios, formas y elementos que podrían hacerle 'perfecto', esto es, divina y sobrenaturalmente justo. Única manera de serlo en el orden actual de la Providencia; y que deja de ser posible, claro está, al prescindir de lo que es razón y base de la vida cristiana y, consiguientemente, de las familias, sociedades e instituciones que hasta ahora vivían en España de la fe, y con la fe crearon su Historia con todos sus hechos gloriosísimos, los mas gloriosos de todas las Historias del mundo, prueba evidente de que los hombres que los han emprendido y llevado a cabo eran hombres perfectos. Por donde tambien se ve que semejante supresión, plan escolar novísimo, abre un abismo infranqueable entre la Gran España Católica y la que se pretende hacer laica y atea, sin Dios, sin fe, sin amor ni conocimiento de Jesucristo, Salvador unico del humano linaje, de suerte que en adelante nada se vea en ella -si posible fuese- que a Cristo recuerde: ni cruz, ni templos, ni Ordenes Religiosas, ni Catecismo con su Decalogo, ni alma racional con fe en otra vida y aspiraciones inmortales."

A eso y no a otra cosa tendía "el plan que nos ocupa", plan que "si contrario por su espíritu diabólico, destructor y enemigo de los derechos de los padres respecto de la educación de sus hijos", lo era aun mas de los derechos de Cristo y de la Iglesia "para hacer hijos obedientes y agradecidos en conformidad con la divina ley del Decálogo, ciudadanos justos 'que se ganen el pan con su propio trabajo', como exige el Apostol, y no quieran vivir del trabajo y propiedad ajena; cristianos rectos que no tengan para sus actos otro modelo que Jesucristo, Santidad infinita; hombres perfectos, en fin, moral, científica, social y religiosamente considerados".

A todo ello se oponía el plan laicizante de las escuelas publicas y centros oficiales sobre el que se arguía como ventaja el respeto que introducía sobre las ajenas conciencias, "dejando a cada uno en libertad para creer en su fuero en punto a religion lo que más le agrada y sólo exigiéndole en fuerza de ese respeto a todos, que toda la actividad intelectual y serenidad de espíritu se dedique exclusivamente al estudio de las ciencias humanas en un claro y tranquilo ambiente de neutralidad religiosa".

Tal postura, que el prelado consideraba un puro "sacilema", era facil rebatirla y, así, pasaba a argumentar en contra de la neutralidad que se quería implantar :

"12. La educación neutra es una contradicción palmaria. Porque no es ni puede llamarse educación lo que no tiene base única y regla fija para determinar la bondad y malicia de los actos del hombre, y si base fija reconoce ya no es neutra: porque lo neutro no es unico ni fijo, no es una

cosa ni otra;⁽²²⁷⁾ y si unico y fijo se considera en su oposicion a Dios, a la conciencia católica y a la sociedad cristiana, equivale, entonces, a serio contra Dios, contra la conciencia y contra la sociedad, y ya deja de ser neutro y nada le queda de educativo, porque no cabe educación posible donde no existe moralidad, y moralidad no se concibe en una mera neutralidad religiosa que a la fuerza y oficialmente se impone y de libertad de eleccion carece.

"29. La educacion neutra es un error clasísimo, oprobioso y humillante para un ser racional y religioso..."

"39. La educacion neutra es tambien el máximo ultraje que se puede hacer a Dios, pues que en ella se desprecia iría y sistemáticamente la autoridad y revelacion divinas en un punto tan de suyo trascendental y grave como es la orientación moral del hombre hacia su final destino..."

Por todo ello "la neutralidad educadora, laicizante, atea" no podía ser respetuosa con las conciencias de niños y jóvenes al impedirles conocer los verdaderos principios educadores de moralidad y justicia y al imponerles "con caracter oficial obligatorio" una forma de enseñanza que no deseaban, siendo la pretension de educación laica "la mayor ofensa para un cristiano" al obligarle "a estribar toda su honorabilidad, no en una conciencia formada según las eternas normas de la verdad y de la justicia, sino en una conciencia neutra, ni una cosa ni otra, o todas las cosas, buenas y malas, a la vez;⁽²²⁷⁾ conciencia mudable, arbitraria, antojadiza, vividora,⁽²²⁷⁾ cuyas unicas reglas morales resultaran, al fin, la concupiscencia y el egoísmo".

(227) En bastardilla en el original.

El único remedio contra todo ello sería extender la enseñanza religiosa, obligación que incumbía a todos, dentro de sus respectivas esferas: padres, maestros y sacerdotes: de ahí que ante la supresión de los colegios y escuelas regidos por religiosos y ante la total prohibición de la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas públicas "necesario y urgentísimo será desde luego sustituirlas por otras de carácter privado, en la extensión y forma que las leyes permitan...".

Esta no sería empresa difícil si en ella cooperaran todos los fieles, siendo preciso que a tal fin se organizaran por medio de las distintas ramas de la Acción Católica: mayores dificultades para la debida formación de los niños se tendría en las aldeas, mas también esperaba que en ellas "las buenas almas" se preocuparían de cooperar con escuelas semejantes a las que se creasen en la capital y en los pueblos, escuelas a las que llamaría "Escuelas Católicas Parroquiales Catequísticas" y que habían de estar bajo la dirección de los respectivos parrocos, todo ello bien en forma aislada donde fuera posible o centralizando en un lugar la escuela para varias aldeas y parroquias. Tales escuelas serían, además, auxiliares de los catecismos organizados que existieran y que debían ser ejemplo de organización y celo comenzando por el parroco director, que, en punto a enseñanza de la doctrina, tenía "obligación gravísima cuya omisión ... bastaría y sobraría para constituir pecado grave y ser materia de condenación eterna", clase de pecado que hacía extensivo a todos a cuantos en alguna forma impidieran la asistencia de quienes de ellos dependían a los actos de formación religiosa ("padres, amos, tutores y aun directores y jefes de talleres, industrias, comercio, etc.").

Sólo como colofón de su extensa exposición y tras reiterar que la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, en las que se exponían "en aislamiento y absurda oposición [con ella] las letras y ciencias humanas...", únicamente podía implicar la desaparición de la paz social, pasaba a autorizar, allí donde no se dispusiera de locales adecuados para fundar las "Escuelas Parroquiales Catequísticas" que había instaurado, el uso de iglesias, capillas y casas rectorales, insistiendo en la conveniencia de que el horario de estas escuelas fuera compatible con el de las oficiales así como que funcionaran durante todo el año, a no ser que carecieran del personal "absolutamente preciso".

Con independencia de ello y mientras no pudieran crear la Junta u Organismo exigido por los metropolitanos,⁽²²⁸⁾ los sacerdotes deberían intensificar cuanto pudieran la enseñanza del catecismo, que debería impartirse tres días a la semana,⁽²²⁹⁾ con independencia de su debida predicación en las misas festivas de mayor concurrencia.⁽²³⁰⁾

(228) Se refiere a los acuerdos adoptados en la conferencia del 3 al 6 de noviembre de 1932.

(229) Estas disposiciones relativas al catecismo, su insistencia en que las "Escuelas Parroquiales Catequísticas" deberían funcionar al tiempo que la catequesis, pero también en horario compatible con las escuelas oficiales, así como que, bajo la dirección del párroco, debería impartirse en ellas una "amplia y sólida... instrucción literaria científico-religiosa", que incluiría elementos de gramática, historia, geografía, etc., todo ello, según decía, "en la extensión y forma que las leyes permitan" y siempre que se contara con el personal preciso, hacía el diseño del prelado muy confuso, pareciendo que las imaginara como un "tertium genus" entre la escuela oficial y la pura lección del catecismo, como un complemento de ambas que, impartiendo elementos de las dos, pudiera hacer atractiva la asistencia de los mismos alumnos de escuelas oficiales; objetivo que parece, no obstante, de dudosa realización práctica y proyecto insólito entre todos los realizados por la jerarquía.

(230) "s.f. Pastoral del Excmo. Prelado de la diócesis sobre la enseñanza del Catecismo", BDE de Orense, año 100, 25 de febrero de 1932, núm. 3, págs. 21-65.

Vivo contraste con la extensa y farragosa pastoral del Dr. CERVINO GONZALEZ, encierra la escueta circular que el Dr. Justino GUITARI suscribió el ocho de marzo. Reproducia en ella los preceptos del código de Derecho canonico, tantas veces vistos, referentes a la cuestion de la formacion religiosa y constataba que, si los niños habian dejado de recibir enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, los adultos olvidaban "lo poco que aprendieron en su infancia" (frase que no dejaba de encerrar, aunque el obispo no fuera consciente de ello, una critica, por omision, a la labor de la Iglesia en el pasado inmediato, y que hemos visto ya objetivamente enjuiciada por otros preladados, aunque es evidente que las palabras del del Dr. GUITARI no tenían tal finalidad). Se apoyaba el prelado en estos dos hechos para dar razon de una situacion que por primera vez era apuntada por un miembro de la jerarquia: el apartamiento general de los fieles del sacerdote: aunque no cabe duda que la apoyatura elegida para fundamentar tal actitud era demasiado endeble y no descendia a sacar las consecuencias de la propia actuacion eclesial en el pasado. El obispo señalaba, en efecto, sucintamente, que niños y adultos "rodeados de un ambiente general de laicismo sectario, respiran por doquier odio a la religion, que desconocen, y a sus ministros, de cuyo trato sistemáticamente se alejan".

(231) Con independencia de los documentos colectivos del episcopado, este prelado se habia limitado a publicar en el boletín diocesano el mensaje de la provincia eclesiastica tarraconense a las Cortes constituyentes y al decreto de 8 de septiembre de 1931 sobre titulacion de los maestros (BOES de 1 de octubre y 10 de noviembre, respectivamente).

Para remediar tal realidad el obispo proponía intensificar la comunicación "entre el sacerdote y el pueblo", y "combatir la ignorancia religiosa", "tanto más crasa, cuanto mayores alardes se hacen de cultura y progreso social", para ello recomendaba al clero el trato frecuente con los niños en el catecismo como forma de acercarse a sus padres, simple fórmula que parece obviar el problema de que, si los mayores se alejaban de los sacerdotes, no había razón alguna para que propiciaran que sus hijos asistieran al catecismo, cuestión que hemos visto contemplada con mayor realismo por otros prelados.

Partiendo de esta sencillez de planteamiento pasaba el Dr. GUIFART a dictar las consabidas normas de organización: catecismo en días laborables, preparación especial para la primera recepción de sacramentos, predicación de adultos, etc.¹²²²

El siguiente escrito de la jerarquía sería nuevamente una circular del obispo de Málaga en la que, con su acostumbrado estilo llano, proponía "la gran Cruzada de primeras comuniones", ya que, si dolorosa era la situación de la diócesis "en ese desfile de cuadros de obreros sin trabajo y sin pan, de hacendados sin haciendas, de pueblos sin paz, de Sacerdotes sin libertad y sin sustento, de Iglesias sin culto y sin Sacerdote."¹²²³ más era que los

¹²²²⁾ 8 de marzo de 1933, "Circular sobre la enseñanza del Catecismo" BOE de Urgel, año 78, 10 de marzo de 1933, núm. 3, págs. 39-41.

¹²²³⁾ Si el obispo recogía el panorama de la influencia de la crisis económica en la provincia, exageradas, cuando menos, parecen sus alusiones a la falta de paz en los pueblos y de libertad de los sacerdotes; las restantes afirmaciones se referirían, obviamente, a la supresión del presupuesto del culto y clero, a cuyo apéndice nos remitimos.

niños no conocieran la religión "ya que los hombres lo impiden", por ello pedía que se realizara la "cruzada" que proponía al estar antes las primeras comuniones, y la preparación para hacerlas, vinculada a las escuelas y a las enseñanzas de los maestros;"'" ahora que ello estaba vetado, había que buscar el medio de preparar a los niños de las escuelas públicas, por lo que los sacerdotes deberían reunir a los miembros de las asociaciones religiosas a fin de encarecer su contribución para atraerlos e instruirlos en el catecismo, ya que "muchos cristianos solo comulgan esta vez en su vida", motivación para la labor propuesta que parece demasiado vinculada a la tradicional religiosidad aparente y ante la que el prelado no hacía mayor comentario.

A estas palabras añadiría el obispo el diseño de un "Programa cíclico de catecismo" con una sección especial para el "Grupo de Primera Comunión" así como unas "Rogativas de los niños ante el Sagrario pidiendo que no les quiten a Jesús", a fin de que "vuelva a la escuela y que todos los niños de España sean siempre católicos."'"

(234) Destaca, una vez más, la constatación de la dejación precedente en manos de los maestros nacionales de competencias eclesásticas específicas.

(235) s. t. "Circular de S.E. sobre la gran Cruzada de primeras comuniones". BDE de Málaga, año 66, marzo de 1933, núm. 3, pág. 63-74.

16. La ley de confesiones y congregaciones religiosas y el juicio del Vaticano sobre la actuación de la jerarquía en la cuestión de la enseñanza religiosa, marzo-julio de 1933.

Un vacío temporal sufren las manifestaciones oficiales de la jerarquía en 1933 sobre el estricto tema de la enseñanza religiosa, probablemente provocado por las expectativas creadas por la promulgación de la ley de confesiones y congregaciones religiosas, en íntima conexión con él; la preparación del documento colectivo de 25 de mayo, dando a conocer el juicio de la Iglesia por tal disposición y, por último, la publicación de este, que viene a llenar la laguna de actuación eclesiástica, más preocupada en este período en dar a conocer a los fieles la injusticia que, a su juicio, cometía el Estado con esta regulación que en seguir insistiendo en el tema de la supresión de la enseñanza de la religión en las escuelas nacionales.

La estrecha relación de ambos temas hace que los documentos del episcopado sobre enseñanza, a partir de la citada ley pasen a tratarlos, en muchas ocasiones, conjuntamente; en tales casos, y a fin de la debida claridad sistemática, hemos optado o bien por desglosarlos, si ambas cuestiones recibían un desarrollo independiente, o bien por incluirlos en uno u otro lugar según el peso que, al hilo de un mismo discurso, se diera a una u otra cuestión; de ahí que el panorama global de la actuación eclesiástica sobre la cuestión de la enseñanza religiosa a partir del 25 de mayo de 1933 haya de completarse necesariamente con la documentación que sobre la supresión de las órdenes y congregaciones religiosas incluimos en el apéndice correspondiente.

De esta forma, tras la circular del obispo de Málaga del mes de marzo no aparecerá, entre los boletines eclesiásticos consultados, documento digno de mención sobre la cuestión analizada hasta la publicación, a mediados

(236) Si se publican en los boletines eclesiásticos en este periodo, desde luego, documentos que, o bien reseñan las actuaciones de los distintos órganos creados por la jerarquía en 1932, conteniendo, a su vez, diseños específicos de la labor a realizar en pro de la enseñanza religiosa, o bien son mandatos muy concretos de actuación dictados por los propios prelados o por dichos órganos o, por último, se trata de noticias divulgadoras en defensa de la enseñanza religiosa; tales fueren, por ejemplo:

1. La reseña de las jornadas de estudio "en torno a la escuela católica" celebradas por el "Comité diocesano de la escuela católica" de Barcelona con el objeto de que "sirvieran de propaganda y orientación... y despertaran el sentimiento de responsabilidad y cooperación en el agudo problema de la escuela confesional, que ha planteado en España la legislación laica del Gobierno".

Tales jornadas se dividieron en dos secciones: una de propaganda y otra de estudio sobre el lema objeto del debate, resaltando el cronista la numerosa concurrencia a ambas y como en la sesión de clausura, a cargo del Dr. JURRITA, "el público llenó la anchurosa nave de la Iglesia...". En tal sesión, aparte de los telegramas de adhesión cursados al nuncio y al cardenal de Tarragona en contestación de sus cartas en apoyo de las jornadas, se acordó el envío de otro al presidente del Consejo de ministros "protestando del Proyecto de Ley sobre Confesiones y Congregaciones".

En el discurso pronunciado, el prelado criticó la actuación de la Iglesia respecto a la educación de los niños, indicando cómo se habían reunido "llamados por la voz levantada contra Cristo, que es la voz de guerra que nos ha despertado del descuido que de la Escuela teníamos", de ahí que, ante tal "voz de guerra", había ahora que conservar lo que existía "y recobrar lo perdido" por medio de la lucha "valiente y legítima" contra el laicismo, de la defensa de las congregaciones religiosas y de la promoción de escuelas católicas paritales "hasta que no quede ni un solo niño sin instrucción religiosa", apuntando la idea de fundar "colegios de vocaciones de Magisterio, Seminarios, Casas del Maestro, etc.", en línea con lo acordado en la conferencia de metropolitanos de noviembre, todo ello por medio de la "unidad de mando, jerarquía y subordinación al Prelado".

Tras la reseña del discurso pronunciado por el obispo se publicaban las conclusiones aprobadas en las jornadas bajo los siguientes títulos: "los padres de familia y la escuela" (conveniencia de que las agrupaciones se formaran alrededor de los centros escolares para hacer más viable, entre otras razones, la defensa de sus derechos y se integraran después parroquial o localmente para la debida coordinación. Esta formación facilitaría -no se explica el fundamento

del mes de julio, de otra circular del Dr. Agustín

de esta apreciación- "la atracción de los obreros para la Acción Católica, los cuales viendo prácticamente herida por el laicismo la libertad de enseñanza de sus hijos y maltratados sus derechos, comprenden el ideal de la agrupación de Padres de Familia y lo aman". La actuación de estas agrupaciones debería encaminarse a aprovechar lo existente, "sea mejorando la enseñanza religiosa donde la haya o poniéndola donde no la haya, sea creando fondos para nuevos maestros en grupos o escuelas ya formadas o bien de otro modo cualquiera. La creación de nuevas escuelas únicamente allí donde no hubiera otro remedio, podría y debería hacerse". Las agrupaciones, por último, deberían educar a otros futuros integrantes "entre otros medios, por la publicación y propagación de un catecismo de matrimonio", que enseñara a los padres sus deberes respecto a la educación de sus hijos"; "Organización de la Escuela Católica" (creación de un fondo para "atender el aspecto financiero de esta formidable cruzada" -termino a cuya utilización ya hemos aludido- para lo cual se realizaría una campaña de propaganda y se crearían comités parroquiales o interparroquiales. El Comité Diocesano sería el encargado de la distribución de dicho fondo, según las necesidades de cada población a cuyo efecto las escuelas inscritas en el "Censo escolar católico del Obispado" serían divididas en tres clases: de alumnos "de clases acomodadas", "de la clase media" y "de humilde condición", siendo el auxilio para las primeras "de carácter oral", para las segundas complementario de las aportaciones de los alumnos y para las terceras total, "ya que en ellas el maestro no hallará de ordinario compensación alguna". Tal división se hacía, no obstante, "como un mal menor, ya que el ideal sería -y aquí se hacía la consiguiente crítica a la falta de subvención estatal y a la cuestión del reparto proporcional- la igualdad de escuela para todos y según la libertad que en orden a la educación de los hijos deben tener los padres". Las finalidades de estas ayudas serían: "La decorosa retribución del profesorado", la atención del local y material escolar y el estímulo de los alumnos por medio de premios, colonias escolares, etc.; no obstante el Comité prestaría especial atención a la escuela gratuita "para neutralizar los estragos de la escuela gratuita laica"; "Las Escuelas Parroquiales" (quedaban estas definidas como "una instrucción de carácter educativo primario, sostenida y controlada por los padres de familia, presididos por el propio párroco, en la cual la niñez de la parroquia recibe educación religiosa y moral, por medio de su incorporación a la vida principalmente litúrgica de la parroquia, y aquel grado de cultura literaria y civil que las circunstancias de tiempo y lugar aconsejen", alusión esta última cuya ambigüedad sigue sin dejar precisar si al frente de este tipo de escuelas debería estar o no un maestro titulado, cosa que parece deducirse, no obstante, de la regulación que se sigue dando. Esta escuela no sería gratuita ni "para los pobres" pues debían acudir los hijos de los feligreses sin distinción y ser sostenida por estos según sus posibilidades, y, siendo la que se adaptaba por completo a la doctrina católica, convenía implantarla en todas las parroquias donde fuera posible aunque evitando "rivalidades con las escuelas congregacionistas y particulares"); "Las Escuelas Particulares" (Deberían inscribirse en un registro e implicaban la intervención directa de la Iglesia en la formación religiosa así como el correspondiente derecho a ayuda económica, la cual podía ser particular para una escuela por medio de subvenciones o becas; o facilitándole personal auxiliar y general para todas

FERRADO BARCELÁ, obispo de Palencia, que data comienzo al

las escuelas, que, a su vez podía ser por la creación de campos de deporte y recreo, cesión de aparatos científicos, fondo bibliográfico o instrumentos de recreo o por la creación de colonias escolares, salas de espectáculos, etc. El auxilio general al profesorado, por último, se basaría en una biblioteca pedagógica, cursillos de ampliación y conferencias de divulgación científica); "Formación del Magisterio Católico" (Mientras la "Normal Católica" no pudiera crearse se utilizarían las asociaciones y residencias católicas ligadas con las enseñanzas del magisterio, instituciones que debían ser "distintas para cada sexo" y cuyo objeto era formar religiosa y pedagógicamente a los aspirantes al magisterio y "suplir deficiencias culturales, y rectificar posibles enseñanzas malisimas, recibidas y asimiladas". Los sacerdotes y maestros católicos debían fomentar la vocación del magisterio en los niños aptos y, en general, este estímulo debería procurarse en los jóvenes mediante diversas actuaciones. Como la diferenciación por sexos que se establecía podía dar lugar a descoordinación, las conclusiones de esta sección se cerraban con la siguiente oración: "Aunque las asociaciones de normalistas católicos deben ser distintas para cada sexo, sin embargo, para la unidad de dirección, convendrá la formación de una Junta Superior, compuesta de representantes de las asociaciones de normalistas de ambos sexos y de los reverendos consultorios de las mismas"); "El Catecismo y la Escuela" (Se aludía a la "inmediata necesidad [del] interés vivamente al espíritu del pueblo a favor del Catecismo en la escuela, a fin de conseguir que se entusiasme por las escuelas que enseñan en Catecismo, para que lo pida hasta en las escuelas oficiales y para que se aparte del más encarnizado enemigo de las escuelas sin Catecismo". Como aclaración a este objetivo se añadía: "En efecto, hay que desenmascarar cuanto nos sea posible las escuelas laicas, y demostrar ante el pueblo lo que son, los destrozos que causan, el desprestigio en que van cayendo en las naciones más avanzadas, en nuestros días, en la civilización moderna, y en particular el desastroso efecto que producen incluso en las mismas familias, ya que venían y hasta anulan la autoridad de los padres sobre sus hijos"); esta campaña debería emprenderse, sobre todo, cerca de los padres y tutores y realizarse especialmente por el clero. Junto a ello se señalaba la necesidad de proceder a una cuidadosa selección de los maestros para las escuelas católicas debiendo procurarse su prestigio, satisfaciendo en lo posible sus necesidades y cuidando su "formación pedagógico-catequística". En el plan de estudios de las escuelas católicas no debía faltar la lección diaria de catecismo, cuidando de estimular a los alumnos por medio de los debidos honores y premios y ejerciendo una verdadera vigilancia sobre su desarrollo). Acababan estas conclusiones con una moción del Comité Diocesano relativa a "la federación de Entidades Pro Escuela Católica" y en la que se apuntaba que el problema escolar entraba de lleno en el campo de la Acción Católica requiriendo el esfuerzo conjunto, por lo que el Comité recomendaba la federación, bajo el control de la jerarquía eclesiástica, de todas las entidades o asociaciones "que tengan por objeto la solución del problema escolar católico en cualquiera de sus aspectos, jurídico, familiar, pedagógico, social, religioso y de formación del Magisterio: quedando siempre a salvo la

desarrollo que hizo el episcopado de las normas que,

autonomía en el régimen interno de cada una de las entidades federadas" (15, 26, 27 y 28 de febrero de 1933, "Comité Diocesano de la Escuela Católica, Jornadas de Estudio en torno de la Escuela Católica", BOE de Barcelona, año 76, 15 de marzo de 1933, núm. 5, págs. 88-98. Esta reseña fue también publicada por el Boletín Diocesano de Pamplona de 15 de abril de 1933, núm. 1755, págs. 113-118).

* El establecimiento, por la Junta diocesana de Acción catequística del obispado de Oviedo de una "Hora santa" de inauguración del "Año Santo" con motivo del XIX centenario de la redención, y en la cual los niños ofrecerían "público testimonio" de su fe, debiendo celebrarse ese día una Comunión general de niños, "invitando también al pueblo". La significación de ese año hacía que todos debieran dedicarse especialmente a enseñar la doctrina cristiana, "no sólo en los domingos y días festivos, como está mandado, sino en otro u otros días entre semana, como se hace ya en algunas parroquias". (frase de la que parece deducirse que el obispo de Oviedo no sólo no había publicado norma alguna de organización de la catequesis parroquial -como hemos visto- sino que tampoco había dado por sí o por esta Junta instrucciones de índole privada a los arciprestes o párrocos a este respecto, pareciendo, pues, que sólo se mantenía la catequesis dominical y que cualquier otra actuación en el sentido de ampliarla era por iniciativa personal del clero, como ya hemos descrito al tratar de las reseñas de las actuaciones de 1932 y volveremos a ver en 1933). Tales lecciones debían darse no sólo en las iglesias sino incluso en casas particulares por medio de "personas piadosas". De esta forma -concluye el mandato- "los Sacerdotes de la Diócesis Ovatese... haremos cuanto nos sea posible para poner remedio eficaz a los males gravísimos, que las presentes circunstancias oponen a la educación religiosa de los niños". (20 de marzo de 1933, "Junta Diocesana de Acción catequística", BOE de Oviedo, año 66, 1 de marzo-1 de abril de 1933, núm. 2, págs. 21-23).

* El nombramiento de "moderador del Catecismo" hecho por el arzobispo de Santiago y la delegación en él de determinadas funciones (vigilancia de la existencia y funcionamiento de la Congregación de la Doctrina Cristiana en todas las parroquias, convocatoria de juntas de párrocos y directores de catecismo, constitución de juntas generales para "la alta dirección de los catecismos" y el dictado de normas comunes, creación de nuevos centros e inspección de los existentes, formación de catequistas auxiliares "de uno y otro sexo," confección de "la estadística de los Catecismos", etc. (15 de abril de 1933, s.f., BOE de Santiago, año 72, 29 de abril de 1933, núm. 2634, págs. 160-182).

* La publicación de los acuerdos adoptados por la "Asociación de Padres de Familia" de la Diócesis de Barcelona y por los que, entre otros, se establecía la formación de una agrupación de padres en cada parroquia y en cada colegio o centro de enseñanza "no solamente confesionales... si que también especialmente para los otros, sean de corporaciones o particulares". Tales agrupaciones tendrían por objeto procurar el mayor grado de eficacia de la enseñanza religiosa en los colegios confesionales, "tanto congregacionistas como de seculares"; organizar esta enseñanza para los niños de escuelas no confesionales

dirigidas a los padres de familia, contenía el documento,

asi como para los que no fueran a ninguna escuela; procurar un lugar de recreo para recoger a los niños los dias no lectivos "a fin de apartarles de otros pasatiempos" y hacer "labor apostólica de formación"; vigilar los "kioscos, cines, sports..." y todo cuanto pudiera constituir "un peligro para los niños" y propugnar el derecho de los niños a la enseñanza religiosa, los derechos y deberes de los padres en este sentido y el sostenimiento proporcional de la enseñanza por parte del Estado, según la importancia de cada escuela, "y no menos el cumplimiento de los demás deberes del Estado para con todo el orden moral". (27 de abril de 1933, "Asociación de Padres de Familia", BOE de Barcelona, año 76, 29 de abril de 1933, núm. 8, págs. 151-152).

¶ El mandato del obispo de Vitoria a fin de que, además de las exhortaciones que los párrocos debieran hacer a los fieles para la colecta en pro de las escuelas católicas, se anunciara esta debidamente en las puertas de las iglesias los segundos domingos de cada mes, con cuyo objeto la "Dirección Diocesana de las Escuelas Católicas" comunicaba que había confeccionado un cartel unificado para toda la diócesis que los encargados de iglesia debieran recoger en su respectivo arciprestazgo. Al final de estas indicaciones se recordaba a los párrocos la remisión urgente a los arciprestes de lo recaudado en el primer trimestre. (s.f. "Obra Diocesana de las Escuelas Católicas. Mandamiento importante y urgente", BOE de Vitoria, año 69, 1 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 250-252). La misma organización reiteraba en el mes de junio las normas para la recogida y colocación de carteles así como el envío de las liquidaciones de las colectas (s.f. "Obra diocesana de las Escuelas Católicas. Recordando prescripciones anteriores", BOE de Vitoria, año 69, 1 de junio de 1933, núm. 2, págs. 294-296); el propio obispo firmaría, ya en septiembre, una nueva reiteración en la que señalaba que, finalizado el tercer trimestre del año "y siendo apremiantes las necesidades de inmediata apertura de nuevas Escuelas y sostenimiento de otras ya existentes de vida económica precaria", era preciso el envío urgente de la liquidación de las colectas pro escuelas católicas o explicación de los motivos por los que no se hubieran realizado o de su nulo resultado, en su caso (14 de septiembre de 1933, "Circular núm. 166. Sobre la urgencia de liquidar las colectas para Escuelas Católicas", BOE de Vitoria, año 69, 15 de septiembre de 1933, núm. 20, pág. 530).

¶ El igual establecimiento de una colecta mensual "Pro Escuela Católica... con el fin de organizar la enseñanza católica en la misma medida que las leyes vigentes la desplazan de los centros docentes oficiales", realizado, como complemento de la imprecisa alusión al fomento de las escuelas católicas contenida en su pastoral de 10 de octubre por el obispo de Oñate (10 de julio de 1933, "Obra diocesana de Culto y Clero, decreto de prórroga de sus Estatutos, establecimiento de las colectas para escuelas católicas y pobres de la parroquia e implantación del sello diocesano", BOE de Oñate, año 52, 15 de julio de 1933, núm. 11, págs. 106-111).

¶ La inserción en varios boletines diocesanos de la carta publicada en "L'Humanité" y en la que M. Jaures contestaba a su hijo rechazando la idea de eximirle de cursar la asignatura de religión en base a que quería para él una

según veremos.

Contrasta este silencio de la jerarquía con el extenso artículo que, aprovechando fecha tan señalada como el 14 de abril, publicó en "El Sol" Rodolfo LLDPIS y en el que hizo un amplio panegirico de la labor realizada hasta entonces por el poder civil en materia de enseñanza primaria. Así, se refirió al ritmo seguido en las construcciones escolares, en contraste con el realizado por la monarquía; a la formación de los maestros mediante los cursos de selección, los cursos de reciclaje y las semanas pedagógicas;¹²³⁷ al funcionamiento de la Inspección y la creación de los Consejos de protección escolar; al diseño de la escuela nacional, respetuosa con la conciencia del niño y, por tanto, laica, de acuerdo con lo señalado en la Constitución, y a la enseñanza mixta. Seguir a este artículo una referencia a la labor seguida respecto de la segunda en-

educación completa, en la que no podía faltar esta enseñanza por toda la serie de ventajas, tanto culturales como morales, que exponía (s.f., "El Catolicismo en el extranjero. Buena lección del socialista Jaures. El laicismo es antipedagógico y cierra el paso a la cultura. Un documento de gran valor testimonial". BOE de Orihuela, año 52, 2 de mayo de 1933, núm. 8, págs. 76-78, también en el BOE de Tarazona y Tudela de 30 de septiembre de 1933, núm. 140, págs. 150-152 y en el BOE de Mondofredo de 5 de noviembre de 1933, núm. 21, págs. 207-208).

* La publicación, por último, de una detallada explicación de la organización de la catequesis en Norteamérica, sin duda con la intención de demostrar que el país a cuyas corrientes modernistas se abrían todos los ámbitos sociales, también era pionero en cuestiones de religión y sus avances podían ser emulables por la Iglesia española que, así, ella también, se abría a las corrientes innovadoras llegadas del nuevo mundo. (s.f., "¿Cómo forman sus catequesis los norteamericanos?", BOE de Zaragoza, año 72, 1 de junio de 1933, núm. 11, págs. 170-171).

- (1237) Mediante estos cursos se intentaba "renovar la formación espiritual y profesional" de los maestros "formados durante la monarquía": las "semanas pedagógicas" trataban de estimular el conocimiento y la puesta en común de experiencias pedagógicas entre los miembros del magisterio y se celebraron en casi todas las provincias, según se deduce de las palabras de Rodolfo LLDPIS y de las noticias que, sobre las mismas, aparecían en la prensa: "El Sol", 4 de abril de 1933: "Se inaugura la Semana Pedagógica" -Guipuzcoa-, en esta noticia

señanza en el que se aludía a la implantación de escuelas preparatorias que permitieran a sus alumnos mediante el sistema de becas, y siguiendo el modelo del Instituto Escuela, acceder a aquella sin solución de continuidad, diseño de programa que se calificaba, precisamente -y en contra de la interpretación dada por la jerarquía- como "escuela única"; igualmente se trataba de la creación de nuevos internados, hecha posible, en gran parte, por la incautación de los bienes de la Compañía de Jesús, y de la creación de la Inspección general de Segunda Enseñanza, necesaria para dar la debida conexión a toda la labor realizada y que se resumía en "la creación de nuevos centros y aun de nuevos tipos de segunda enseñanza, la multiplicación de los internados, la renovación de gran parte de los profesores, la aplicación de reformas (y) la renovación, en fin, del espíritu, de las normas, de la disciplina y de la orientación general de la segunda enseñanza". (238)

A estas descripciones hay que contraponer, no obstante, las críticas hechas a la reforma seguida en materia de segunda enseñanza y en las que se aludía a su precipitación,

se alude al discurso pronunciado por LLOPIS, destacando la necesidad de respeto a la conciencia del niño y, por tanto, del laicismo en la enseñanza, que no iba contra ningún sentimiento y que si muchos lo combatían era "porque borra muchos mezquinos intereses materiales y económicos"; "El Sol", 5 y 7 de abril de 1933; "El cursillo de cultura pedagógica" -Burgos-: en el que, entre otras conferencias, se pronunció una sobre "el laicismo en la enseñanza"; "El Sol", 23 de mayo de 1933; "Clausura de la Semana Pedagógica" -Ciudad Real-; "El Sol", 30 de mayo de 1933; "Semana Pedagógica" -Bilbao-; "El Sol", 17 de junio de 1933; "Semana Pedagógica" -Huelva-; "El Sol", 22 de junio de 1933, "Semana Pedagógica" -Lugo-...

- (238) "El espíritu republicano, vigoroso propulsor de la instrucción pública", "El Sol", 14 de abril de 1933. La importancia de la descripción de los logros de la República en materia de enseñanza, nos hace incluir este artículo en el apéndice núm. 23.

a la exclusiva actuación gubernamental (como había sucedido en el ámbito de la primera enseñanza) pretendiendo soslayar la intervención de las Cortes,⁽²³⁹⁾ al fracaso seguido en el programa experimental implantado para el primer año del bachillerato⁽²⁴⁰⁾ o, en fin, a la falta de una reforma real, según palabras del entonces rector de la Universidad Central, Claudio SANCHEZ ALBORNOZ.⁽²⁴¹⁾

No es tema de esta tesis entrar en el análisis de las realizaciones de la República⁽²⁴²⁾ pero si creemos necesario, llegados a este punto, contrastar tales realizaciones con lo efectuado hasta la fecha por la jerarquía católica como medio de paliar el laicismo de la indudablemente ingente labor republicana en pro de la enseñanza.

Dato revelador de ello fue la transmisión que la nunciatura efectuó a todos los obispos el 13 de julio de 1933, por medio de una carta-circular, del escrito de la Sagrada Congregación del Concilio en el que se emitía el parecer del Vaticano sobre los informes recibidos de las catequesis parroquiales.

Ya hemos reseñado el interés del episcopado en dar a conocer las actividades que en cada diócesis se desarrollaban en relación con la catequesis y su insistencia en destacar la concurrencia con que los fieles, tanto niños como adultos, respondían a ellas. Esta carta —que elogiaba la diligencia con que los obispos habían respondido al pro-

(239) "El Sol", 21 de mayo de 1933, (Crítica que, como hemos visto, ya había sido previamente formulada por "El Debate" el 31 de diciembre de 1932 al analizar las bases para la reforma de la primera enseñanza).

(240) "El Debate", 24 de junio de 1933.

(241) "El Sol", 16 de julio de 1933. En la falta de una efectiva reforma volvería a insistir "El Sol" el 18 de agosto de 1933.

(242) Ver RAMOS-OLIVEIRA, Antonio, op. cit., págs. 148-150.

blema planteado con la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales, organizando las correspondientes lecciones de catecismo- revelaba, no obstante, que las noticias publicadas por los distintos boletines diocesanos en un intento de demostrar y difundir la positiva respuesta de los fieles al problema planteado y a las organizaciones creadas, no eran tan satisfactorias como se pretendía dar a entender y, así, se quejaba la Sagrada Congregación de que "Ni siempre, ni en todas las diócesis, ha habido por parte de los fieles la correspondencia que fuera de desear, como lo demuestra el porcentaje, a veces mínimo, de los niños que frecuentan el catecismo parroquial". La carta, por otra parte, insistía en el establecimiento de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias y alababa la iniciativa de los prelados que habían establecido un Secretariado para la vigilancia de la enseñanza catequística. (***)

- (243) 13 de julio de 1933, "Nunciatura Apostólica en España, Carta Circular transmitiendo la contestación de la S. Congregación del Concilio sobre los datos recibidos de las catequesis parroquiales e insistiendo en la necesidad de la Cofradía de la Doctrina Cristiana en todas las parroquias", Documental num. 19, 1933, págs. 154-155. (Ver el apéndice 24). También publicada independientemente en distintos boletines diocesanos, así, en los de Burgos (año 76, 15 de septiembre de 1933, num. 15, págs. 285-286), Valencia (1 de octubre de 1933, num. 2180, pág. 313), Tarazona y Tudela (año 71, 31 de octubre de 1933, num. 742, págs. 703-705) o Palencia (año 83, 2 de octubre de 1933, num. 19, págs. 529-533). Este último boletín incluía, además, un comentario del Dr. PARRADO a la citada carta en el que el prelado, dirigiéndose al clero, insistía en las recomendaciones que hacía la Sagrada Congregación del Concilio, encareciendo la reflexión sobre "la triste situación actual de persecución religiosa" cuya principal causa era "la deficientísima instrucción cristiana de nuestro pueblo, por no haberse empleado los medios oportunos". Estos medios habían sido establecidos en su día por Pío X en todo el mundo "pero, o porque no se sintió hondamente la necesidad ni se vió toda la gravedad del peligro, o porque era menester abnegado y perseverante esfuerzo para vencer las dificultades y acudir al mal con el remedio, tras la sacudida más o menos fuerte que hasta los más tibios no pudieron menos de experimentar, triunfó la negligencia en no pocos, y las prescripciones y reglamentos en muchas partes, muy pronto, no vinieron a ser otra cosa sino letra muerta": hoy en España no podía haber disculpa alguna para no cumplir estas recomendaciones "cuando en las escuelas todas del Estado se prohíbe en absoluto la enseñanza de la religión y se tiende a provocar el desprecio y el odio contra ella. Ni podemos esperar que se enseñe en las familias, pues estas por lo común, aun suponiendo que tuviesen voluntad

17. El desarrollo de las normas del documento colectivo de 25 de mayo de 1933 sobre los deberes de los padres de familia, julio-octubre: obispados de Palencia, Vich, Pamplona, Orense, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Tortosa.

Como ya hemos indicado, el tema central del último documento colectivo que la jerarquía eclesiástica dictó en el primer bienio republicano trataba de la inminente promulgación de la ley de confesiones y congregaciones religiosas; no obstante, la íntima conexión de esta cuestión con la de la enseñanza oficial de carácter laico, hizo reiterar a los prelados las normas sobre la conducta que habían de seguir los padres de familia en relación con la educación de los hijos, normas que insistían en la prohibición canónica de su asistencia a escuelas no confesionales, salvo en aquellos casos en que el Ordinario lo autorizase "con las debidas cautelas".

de hacerlo, hallanse faltas de capacidad y acoso de tiempo y coyuntura. A lo que se añade el ambiente social que de favorable a la religión se ha trocado en adverso"; por ello todos y cada uno de los sacerdotes debían cumplir como prioritario el magisterio de la enseñanza y ello aunque las dificultades, "acrecientadas al presente", exigieran de ellos un esfuerzo mayor y un aumento de tareas y sacrificios "precisamente cuando se nos ha privado de los medios de subsistencia que antes teníamos, y tanto cuesta lograr de los pueblos siquiera lo absolutamente indispensable para vivir", mas debían estar seguros de que Dios movería el corazón de los fieles si trabajaban por la educación cristiana de sus hijos.

También el BOE de Sevilla publicaría esta carta-circular en el mes de octubre pero, en este caso acompañada de una pastoral del arzobispo, a la que más adelante aludiremos.

No cabe duda que las determinaciones introducidas en este punto por el referido documento colectivo, si bien reiteraban aquellas, implicaban un endurecimiento del criterio episcopal respecto a las disposiciones del de 20 de diciembre de 1931, lógicamente motivado por la prohibición absoluta de la enseñanza religiosa en los centros oficiales que daba un nuevo cariz a la enseñanza estatal; la constatación de una actitud laicizante en parte del magisterio, cuya actuación pasaba a querer evaluar la Iglesia en cada diócesis¹²⁴⁴ y la próxima promulgación de la nueva Ley¹²⁴⁵.

1244) Ver más adelante, en este sentido, la pastoral del obispo de Valencia de 29 de octubre.

1245) "12. No es difícil precisar las obligaciones serias y urgentes que en las presentes circunstancias imponen a los católicos españoles las enseñanzas pontificias y los preceptos del derecho canónico:

12. Deben los padres de familia mandar a sus hijos únicamente a las escuelas católicas.

13. Prohibida severamente la asistencia a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas, o sea las que están destinadas también a los no creyentes, sólo al Ordinario del lugar corresponde juzgar si puede tolerarse la referida asistencia en determinadas circunstancias y con las debidas cautelas.

14. Cuando el Ordinario haya estimado prudente la anterior tolerancia por existir causa razonada a tenor de las instrucciones de la Santa Sede, los padres y tutores vienen obligados gravemente a guardar las siguientes cautelas: a) inspeccionar por sí mismos o por personas idóneas los libros que se ponen en manos de sus hijos y las doctrinas que se les inculcan; b) procurar que fuera de la escuela sean sus hijos o menores sólidamente instruidos en la doctrina cristiana y estimulados celosamente a la práctica de los deberes religiosos; c) apartarles del trato y amistad de los compañeros escolares que puedan poner en peligro su fe y costumbres cristianas.

15. Todos los fieles se esforzarán a prestar su auxilio moral y material a la fundación y sostenimiento de escuelas católicas, y en particular los padres de familia habrán de ejercitar su derecho a organizarse, reivindicando su libertad docente y la creación de escuelas católicas homogéneas en conformidad con sus creencias. No han de cejar hasta conseguir que sea cumplida realidad este ideal y derecho de la Iglesia; toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas."

(IRIBARREN, Jesús. *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, cit., pág. 204).

La interpretacion estricta de lo determinado en el canon 1374 que hizo el documento colectivo de 25 de mayo venia a constreñir la esfera de libertad de los fieles en lo que respecta a la posibilidad de enviar a sus hijos a las escuelas oficiales, lo cual, se insistia ahora, no podian en forma alguna hacer sin la intervencion previa de su prelado. Si este mandamiento no era, como hemos visto, en absoluto nuevo y, por tanto, bien podian haber hecho uso de el los distintos obispos desde la publicacion de la circular de 12 de enero, su plasmacion en el documento colectivo de mayo, que recibiria publicidad en todas las diocesis entre el ultimo dia de este mes y el 1 de julio, hizo que varios de ellos pasaran seguidamente a dictar las oportunas normas sobre asistencia de niños catolicos a las estatales escuelas laicas, normas que representaban una variedad de posturas, laxas en unos casos y extremadamente rigidas en otras.

Asi, entre las diocesis consultadas, procedieron a desarrollar este punto del documento, durante los meses de julio a octubre, los prelados de Palencia, Vich, Pamplona, Orense, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Tortosa, lo cual harian bien monograficamente, bien en el conjunto de nuevas consideraciones e instrucciones sobre la enseñanza religiosa.

El Dr. Agustín PARRADO GARCÍA suscribiria a mediados de julio una circular mandando leer la enciclica de Pío XI sobre la situacion de Espana, "Dilectissima Nobis", en lugar de la homilia dominical y estableciendo las directrices que habian de seguir sus diocesanos en punto a la asistencia de sus hijos a las escuelas nacionales.

Como fundamento de dichas normas se refería el prelado tanto a las enseñanzas pontificias como, desde luego, al documento colectivo del episcopado. Así el Dr. PARRADO, ordenando que lo que establecía fuera leído a los fieles tras la encíclica, recordaba, en una permisiva regulación, la prohibición que pesaba sobre los padres de enviar a sus hijos a escuelas "acatólicas, neutras o mixtas", la obligación que sobre ellos recaía de, en caso de no poder hacer lo anterior, enviarlos a la catequesis y vigilar que en la escuela a la que asistieran no se impartiera enseñanzas contrarias a la religión así como el contenido de los libros de texto que utilizaran.¹²⁴⁶

"Vivimos momentos difíciles. Se acercan horas de prueba. Las escuelas en breve serán de nuevo abiertas; pero no todas, porque a los religiosos se les prohíbe la enseñanza". Con estas frases comenzaba el obispo de Vich y administrador apostólico de Gerona la circular que el 18 de agosto dirigía a los fieles y en la que se proponía -sin decir "ni una palabra injuriosa contra el Principio de Autoridad, contra el poder constituido", expresión respetuosa que más parece propia de los primeros documentos de la jerarquía y no de estas fechas, cuando la mayoría de los prelados habían expresado ya duros juicios sobre la actuación de los poderes del Estado- recordar a los padres de familia las enseñanzas de la Iglesia en materia de enseñanza.

¹²⁴⁶ 8 de julio de 1933, "Circular. Mandando leer la Encíclica 'Dilectissima Nobis' y dando normas acerca de la asistencia a las escuelas". BDE de Palencia, año 83, 15 de julio de 1933, núm. 14, págs. 393-394.

Para ello reproducía el prelado los párrafos de la encíclica de Pío X "De christiana Juventutis educatione" condenando la escuela "neutra o laica" y los del documento colectivo de 25 de mayo en que se señalaba el deber de los padres de enviar a sus hijos a la escuela católica y la prohibición de que asistieran a las neutras o mixtas, salvo opinión del ordinario; añadiendo que, según los moralistas, existía prohibición absoluta de que los niños asistieran a aquellas escuelas en que la fe o la moral corrían "peligro próximo tan grave que no puede ser removido por cautela alguna v.gr. cuando el maestro es ateo y enseña que no hay Dios o cosa parecida", siendo en todo caso, aunque no hubiera peligro próximo de perversión, "gravemente ilícito" enviar a los niños a las citadas escuelas, por fomentar el indiferentismo y conducir al ateísmo.

Por ello declaraba que los padres venían obligados, "en conciencia", a mantener abiertas las escuelas católicas legalmente existentes y a procurar que se abrieran donde aquello no ocurriera y si esto no era posible "por causas ajenas a su voluntad", los parrocos deberían abrir escuelas de religión en sus casas y hasta en el templo, según permitía el artículo 48 de la Constitución.

También deberían indicar a los padres (y con ello pasaba a dar las oportunas instrucciones para ambas diócesis en este extremo, según lo señalado en el documento colectivo de 25 de mayo) que si no había "peligro próximo de perversión de sus hijos" podían enviarlos a las escuelas laicas siempre que: a) inspeccionasen por sí o por personas idóneas los libros que utilizaban los niños y las doctrinas

que se les enseñaban; b) procurasen que fuera de la escuela fuesen instruidos en la doctrina cristiana y se les estimulara en la practica de los deberes religiosos, y c) les apartaran de los compañeros de escuela que pudieran poner en peligro su fe y sus costumbres cristianas. Para facilitar el cumplimiento de estas "cautelos" recordaba el prelado a los parrocos las disposiciones ya dictadas en ambas diocesis y que coincidían con el sentir de la Iglesia, al apreciar la Sagrada Congregación del Concilio el reifloreimiento de la escuela parroquial de la doctrina cristiana.⁽²⁴⁷⁾

Finalizaba la circular exhortando a los parrocos en orden a la efectividad de la "Cofradía de la Doctrina Cristiana", de acuerdo con los deseos de la citada Congregación vaticana y reiterando que "se avecinan días de lucha encarnizada en que dos bandos opuestos van a disputarse el alma de los pequeños: unos pretenden descristianizarlos; otros por el contrario quieren recristianizarlos, santificarlos", aseveración ante la que el prelado se preguntaba de quién sería la victoria concluyendo que todo cuanto se hiciera por los niños sería sobrenaturalmente recompensado.⁽²⁴⁸⁾

También el obispo de Pamplona Dr. Tomás MURIZ PABLOS se dirigiria a los fieles a fin de establecer las "cautelos" que, siguiendo las directrices del documento colectivo, debían cumplirse en orden a la posible asistencia de sus hijos a las escuelas laicas. Para ello comenzaba

(247) Ver sobre ello la nota 255.

(248) 18 de agosto de 1933. "Exhortación sobre escuelas católicas", BOE de Gerona, año 77, 25 de agosto de 1933, núm. 8, págs. 289-291. También en el BOE de Vich, año 79, 31 de agosto de 1933, núm. 2128, págs. 412-415.

transcribiendo los cánones 1372; 1373 y 1374^{***} y pasaba seguidamente a glosarlos indicando como el primero contenía dos preceptos negativos para los fieles, condenando uno "siempre y en todo momento" toda instrucción atea, herética o simplemente naturalista y el otro toda enseñanza que "directa o indirectamente corrompa el corazón de los fieles con principios, máximas, costumbres o procedimientos que contradigan los Mandamientos de la ley de Dios, que es el código de la moral cristiana", comentario en el que, como vemos, el Dr. MUNIZ, siguiendo los preceptos canónicos, se ceñía -a diferencia de la generalidad que veremos defendida por el obispo de Segovia-^{***}, a señalar el exclusivo sometimiento de los fieles a las pautas de "honestidad de costumbres" marcadas por la Iglesia católica. Junto a estos dos preceptos encerraba el canon 1372 otros dos de carácter positivo, determinando el primero que toda instrucción había de subordinarse a la doctrina religiosa y estableciendo el segundo el derecho y la obligación de los padres, o de quienes hicieran sus veces, de velar porque sus hijos fueran educados cristianamente.

Basándose en este precepto destacaba el prelado como la Iglesia reconocía y enseñaba tal derecho de los padres y, por tanto, que quien lo arrebatara cometía una injusticia: derecho que, si bien podía actuarse por medio de terceras personas, obligaba, al tiempo, "a velar porque esas terceras personas, esos maestros e instructores, sean muy cuidadosos en la instrucción que den a los niños".

El canon 1373 determinaba, por su parte, que en todos los centros de enseñanza se impartiera enseñanza religiosa de acuerdo con la edad de los alumnos, de ahí que los católicos debían procurar, en la medida de sus posibilidades, que no hubiera un solo centro de enseñanza en que no se recibiera la instrucción religiosa, alabando aquí la actuación de la "Asociación de Padres de Familia" de la ciudad y de otras parroquias de la diócesis al establecer clases de cultura superior religiosa "donde se suplen . . las deficiencias lamentables que se dejan sentir en otros centros".

El canon 1374 establecía, por último, la prohibición de la asistencia de los niños católicos a escuelas "acatólicas", "neutras" o "mixtas" y el prelado explicaba que estas últimas eran las que impartían distintas enseñanzas religiosas según la respectiva fe de sus alumnos, pero que también eran llamadas así las que admitían alumnos de ambos sexos, tema este al que no se refería este canon mas en el que no era necesario insistir, "pues es cosa harto sabida y por todos lamentada", dados "los peligros que a los adolescentes acarrea esa promiscuidad".

Siendo deber del obispo señalar la línea de conducta a seguir por los fieles pasaba a resumir la doctrina de los canones citados señalando: 1) que donde hubiera escuela católica no era lícito para los padres enviar a sus hijos a otra distinta; 2) que no existiendo escuela católica tampoco podrían enviarlos a otras en las que los maestros "no ofrezcan absoluta garantía de que se ha de respetar la conciencia del niño católico" y ello aun a riesgo de que el niño quedara sin instrucción elemental, que siempre podía

suplirse por otros medios y, 3) que en caso de que el maestro "por su moralidad, por su fe y por su conducta, a la vez que por la experiencia del pasado" ofreciera aquella garantía, podían ser enviados los niños si por otros medios se suplía su instrucción religiosa, aunque "bien entendido que dicha asistencia nunca es un bien, sino un mal, siquiera menor, que hay que desterrar y procurar que desaparezca cuanto antes", postura que, como vemos, era más estricta que la expresada por los obispos de Palencia y de Vich, dados los requisitos exigidos a los maestros para consentir la asistencia de los hijos de católicos.⁽²⁵¹⁾

Muchas ambigüedades encerraba el comienzo de la nueva pastoral que en el mes de septiembre dirigió el obispo de Orense a sus diocesanos y en la que se reservaba la facultad de autorizar, por sí o por los parrocos, la enseñanza de los niños en escuelas neutras, dando a sus fieles un indudable tratamiento de minoría de edad moral que contrasta con las pautas dictadas por los demás prelados para guiar el criterio de los padres de familia en este punto, que, con un rigor extremo, podían ser incluso excluidos de la participación en los sacramentos si, contrariamente a lo determinado, enviaban a sus hijos a las escuelas neutras.

Iniciaba el obispo su escrito refiriéndose a una positiva reacción de los fieles -que no especificaba, amparándose en un mero "se dice"- y aludiendo después a un cambio negativo anterior cuyas exactas consecuencias parecen

(251) 24 de agosto de 1933, "Las leyes de la Iglesia Católica acerca de la instrucción religiosa de la niñez y de la juventud", BOE de Pamplona, nº 72, 1 de septiembre de 1933, núm. 1764, págs. 277-281.

no haber sido nunca medidas en la diócesis y, así, si por un lado se congratulaba de "las muy gratas noticias de cristiana reacción que dicen se opera en forma pública y visible en toda la diócesis", por otro formulaba la hipótesis de que la situación precedente respondía a que "quizá en mala hora y sólo en muy pequeña parte se había dejado esta seducir a fuerza de absurdas, bien que halagadoras promesas", promesas que, según cabe deducir de las palabras del prelado, no dejaban de hacer referencia a la ruptura con el anterior régimen (lo cual condenaba, en una implícita defensa de la unión del trono y el altar), y que habían hecho creer "que el anhelado término de sus males y codiciado bienestar serían logrados con sólo cambiar de regímenes en libre emancipación y formal renuncia de todo lo tradicional y religioso que había constituido, precisamente, nuestra nacionalidad gloriosa".

De todas formas el obispo pasaba a cuestionarse seguidamente la autenticidad de tal reacción, "tan apetecida y querida de los buenos patriotas", señalando que, para averiguar su carácter, preciso era dilucidar si existían en ella "contrición y penitencia, convicción íntima, sobrenatural y perseverante, a la que suele preceder el escarmiento" que eran las condiciones para conocer si, en efecto, podía valorarse según los principios de la religión católica, única verdadera, fuera de la cual no había "reacción saludable, regeneración segura, salvación posible para la sociedad, familias e individuos..."; de ahí que no pudieran encuadrarse en este movimiento positivo a los que si por un lado asistían a los actos religiosos, por otro no se privaban "de tentar y escandalizar con mundanos modos en la calle", modos en los que el prelado incluía la asistencia

a espectáculos "por inmorales e indecentes que sean"; a estos fieles no habia de perseguirlos el sectarismo pues "en realidad ya son suyos".

Para paliar estos males era deber de los obispos impedir su avance y contener "el triunfo de la impiedad, libre y desbordada en nuestros dias merced al apoyo y garantia que le prestan las leyes" y, por ello, llamaba ahora la atención de los fieles sobre los preceptos y deberes que la Iglesia imponia en materia de enseñanza, extractando, a estos efectos, las normas contenidas sobre este extremo en la ultima pastoral colectiva.

Señalaba así el prelado: a) el deber de los padres, de proporcionar a sus hijos escuelas donde se enseñara la religion catolica, amén de darles su personal instrucción y buen ejemplo, b) solo el ordinario o el parroco podian juzgar si estaba permitida la asistencia de niños a escuelas neutras o laicas, c) si, dadas las debidas garantias, permitia el ordinario tal asistencia, era deber de los padres o tutores preocuparse de la orientación moral y religiosa de sus hijos, para lo cual debian vigilar los libros de texto, procurarles los medios para formarse religiosamente y apartarles del trato y amistad "de compañeros escolares que así no sientan y en sentido contrario les hablen con plan e intento de seducirles".

Junto a ello insistia el obispo en la necesidad de que todos los fieles contribuyeran a ayudar, moral y materialmente, en la fundación, sostenimiento y desarrollo de las escuelas católicas, labor que incumbia especialmente a los padres de familia, a quienes tocaba "reivindicar por

todos los medios a su alcance, el derecho natural que les asiste de enseñar a sus hijos de conformidad con sus creencias" y, por ende, proporcionarles tales escuelas; dicho derecho era consubstancial a la condición de padre y precepto de la Iglesia "cuya suprema aspiración, particularmente en nuestros días de anarquismos y social desquiciamiento, pudiera decirse que se reduce a la enseñanza, afianzamiento y difusión de la doctrina católica en catecismos y escuelas católicas".

Tenia, además, tanta importancia el deber de la educación religiosa que quienes, advertidos por sus parrocos, persistieran en permitir que sus hijos "o dependientes" se formaran en escuelas neutras, acatólicas, habrían de ser considerados "formalmente rebeldes a la doctrina, autoridad y preceptos de la Iglesia, e incapaces, por tanto, de recibir sus sacramentos, ni aun en el supremo trance de la muerte, a menos que antes de corazón se convirtieran y en cuanto les sea posible reparen el mal y el escándalo".***

Dicho el arzobispo de Valencia en 30 de septiembre una pastoral cuyo propósito era comentar las respuestas enviadas por los parrocos al Secretariado de Acción Católica según lo ordenado en el "aviso" publicado en el boletín diocesano en el mes de febrero y por el que se disponía, con el fin de conocer las circunstancias de la archidiócesis y poder actuar en consecuencia, la remisión de información sobre cuatro puntos: la formación de los fieles, el fomento de su piedad; la mejora de sus circunstancias, "aún de orden temporal", y la realización de propaganda.***

(252) 20 de septiembre de 1932, "Carta pastoral", BOE de Orense, año 100, 25 de septiembre de 1933, núm. 19, págs. 286-291.

(253) s.f., "Aviso sobre hojas de información", BOE de Valencia, 1 de febrero de 1933, núm. 2164, pag. 33.

Antes de entrar en el análisis de los cuatro puntos referidos haria el Dr. MELO ALCALDE unas consideraciones de tipo general por las que llamaba la atención de sus sacerdotes para que no se dejaran embargar por el pesimismo: el triunfo de la religión era indudable como lo probaba su existencia a través de los siglos y lo garantizaba la intervención divina que "en su providencia infinitamente sabia permite, para sanar a los pueblos y a las naciones, esas alternativas que llenan la Historia de la Iglesia": tampoco debían dejarse ganar por actitud alguna egoísta pues "si siempre nos conviene el ser desprendidos y generosos, mas aun en las graves circunstancias actuales, para dar tambien ejemplo de mortificación" y, por ultimo, debían actuar cerca de la Acción Católica a fin de que esta estimulara a los fieles "para salir del estado de rutina y de indiferencia en el que ahora languidecen", para lo que debían seleccionar "a los mas dispuestos para ser de los mejores... y merezcan la admiración y la estima de todos que, al fin, se decidirán a imitarlos".

Refiriendose ya concretamente al punto relativo a "la formación de los fieles" comenzaba el arzobispo inscribiéndose -pese a su anterior alusión a la providencia divina sobre las alternativas históricas de la iglesia- en la línea de los prelados que efectuaban sin ambages una crítica a la precedente actuación eclesiástica, actuación que habia tenido como consecuencia la extensión de la ignorancia religiosa que ahora se sufría, al haber justificado el estamento eclesiástico español indebidamente su pasividad en la tradición religiosa del pueblo. Es una lástima que, junto a tal juicio crítico, no entrara el Dr. MELO ALCALDE -a diferencia de lo que, si bien con muy escaso rigor, harían otros prelados- a analizar aquí las verdaderas apoyaturas de esa tradición que, por la pasividad eclesiástica que

denunciaba, daban lugar ahora a la rutina e indiferencia de los fieles.

"Tan evidente como es que la ignorancia religiosa nos ha traído el lamentable estado que tan justamente padecemos, es cierto que la instrucción religiosa es la que ha de redimirnos... Que lo que hemos venido haciendo no es bastante, nos lo dicen los hechos con su incontrastable realidad.

«Y lo mas triste para nosotros es que hemos de reconocer no hemos cumplido con la debida exactitud lo dispuesto por Nuestra Madre la Iglesia, pues fiados en la tradicion religiosa de nuestro pueblo hemos pretendido justificar la interpretacion excesivamente laxa de sus sagrados canones."

Ante los resultados de tal comportamiento solo cabia la pronta reaccion para reconquistar el tiempo perdido, procediendo a la urgente instruccion del pueblo por medio de la catequesis; esto debia darse en todas las parroquias y dirigida a todos los fieles, de forma que abarcara a "los niños y niñas", "los mozos", "las jovenes" y "los adultos".

Tras esta reiteracion de las instrucciones ya dadas en 2 de febrero de 1932 pasaria el arzobispo a dictar las normas relativas a la asistencia de los niños a las distintas escuelas, señalando, a estos efectos, como principio general, que era necesario persuadir a los fieles que el mandar a sus hijos a las "escuelas sin Dios" no era licito y que "ante la gravedad de las circunstancias" solo los obispos podian resolver lo pertinente; por ello, alli donde hubiera escuela parroquial o escuela particular catolica a ellas deberian asistir los hijos de los catolicos.

Sentada esta pauta básica el Dr. MELO procedía, no obstante y a renglón seguido, a conceder una autorización general para que los fieles de su diócesis pudieran enviar a sus hijos "a las escuelas de que puedan servirse", lo que suponía, implícitamente, una autorización más amplia que la concedida por ningún otro prelado. Ahora bien, podían proceder así siempre y cuando entendieran que quedaban sometidos a "dos obligaciones graves": que habían de preocuparse "gravemente" de que sus hijos asistieran a la catequesis "con la misma asiduidad con que asistan a la escuela" y que la autorización cesaría "ipso facto" en el momento en que pudieran disponer de escuela católica. Como matización de la amplia autorización concedida, añadía que "en los casos extremos, o sea cuando la fe y la moral corren peligro próximo tan grave que no pueda ser removido con cautela alguna, v.gr., cuando el maestro es ateo y enseña que no hay Dios o cosa parecida, los padres católicos deben abstenerse de enviar sus hijos a tales maestros", palabras que, como vemos, son fiel reproducción de las del obispo de Vich y que, como el resto de los prelados, a excepción del de Orense, no presumían el juicio previo del párroco o del ordinario sobre maestros determinados. Añadía el arzobispo, no obstante, tal como había hecho el obispo de Pamplona, aunque partiendo de una consideración menos estricta sobre los maestros, que debían proceder así porque "la ignorancia en los conocimientos humanos es preferible a la perversión", clara llamada a la abstención en los casos extremos aun cuando no hubiera otra escuela alternativa. (254)

(254) 30 de septiembre de 1933, "Instrucción Pastoral acerca de la Información Reservada," BDE de Valencia, 15 de octubre de 1933, núm. 2181, págs. 325-334.

Las normas dictadas por el Dr. MUXIZ sirvieron de indudable inspiración a la pluma del Dr. DOMENECH VALLS, arzobispo de Zaragoza que, en circular del 11 de octubre, pedía al clero que no dejara de insistir cerca de los padres en la obligación que tenían de instruir en la fe cristiana a sus hijos, instándoles a que "les representaran al vivo cuán enormes daños ocasiona la incuria en esta materia, cuán estrecha cuenta les pedirá Dios y que no hay mayor pecado, ni desorden ~~mas~~ monstruoso que el condenarles a la ignorancia y a la muerte espiritual", siendo ellos los llamados en primer lugar -y aunque encomendaran su educación a otras personas- a inculcarles los primeros rudimentos de la fe e instruirles moralmente y debiendo siempre vigilar que la actuación de aquellos instructores se realizara "con la exactitud y escurpulosidad debida", cambiando, en otro caso, de maestros, con los cuales, si impartían la debida educación cristiana debían colaborar, confirmando con palabras y obras sus enseñanzas.

Dicho esto, y tras glosar lo señalado en los cánones antes citados, pasaba el Arzobispo a dictar una serie de "normas preceptivas" para los padres católicos que, con ligeras variantes de estilo, venían a reproducir las establecidas por el Dr. MUXIZ PABLOS añadiendo a la tercera unas directrices complementarias por las que determinaba que la suplencia de la instrucción religiosa correspondía al párroco, y que los padres, siguiendo lo establecido en el documento colectivo, debían estimular la práctica de los deberes religiosos de sus hijos, cuidar de que no cayeran en sus manos libros "heterodoxos o peligrosos" y "apartarlos del trato y amistad con otros escolares que pongan asechanzas a su fe o los induzcan a costumbres licenciosas o perversas".

Insistía luego el arzobispo en la necesidad de intensificar el catecismo que debía impartirse cuatro días a la semana, incluyendo el domingo, y ello en base a lo permitido tanto por el artículo 48 de la Constitución como por el 20 de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, constándole como los párrocos prestaban con gusto "este servicio penoso" que era el de mayor provecho para las almas y el cual debían continuar y fomentar para que aumentase el número de niños que asistían al catecismo, propaganda en la que debían desplegar "todas las industrias que les sugiera su celo". Lo ideal, no obstante, sería que en todas las parroquias existiera "una escuela católica, costeada por los padres de familia", según el deseo expresado por la Sagrada Congregación del Concilio,¹²⁵⁵ iniciativa que creía viable con módico esfuerzo y con la generosidad de los fieles.

La enseñanza del catecismo no era, sin embargo, suficiente para formar católicos: la formación religiosa debía prolongarse durante la juventud, por lo que en los colegios privados, juventudes católicas, asociaciones piadosas de jóvenes e instituciones post escolares debían organizarse cursos sistemáticos de religión y ciclos de conferencias populares.

Acababa la circular señalando como era precisa la cooperación de todos, "en esta época de ruinas y deserciones", para un mayor incremento de la fe y de

(255) Creemos que de la fórmula empleada por la citada Congregación ("escuela parroquial de la doctrina cristiana") no se infiere con claridad que esta se tratara, como el arzobispo deduce, de una escuela católica de enseñanza primaria "stricto sensu", tal como habían propuesto las dos conferencias de metropolitanos, antes al contrario parece aludir a un tipo de escuela dedicada fundamentalmente a la enseñanza religiosa y ajena, por tanto, al resto de materias escolares. (Ver el apéndice núm. 24).

la cultura religiosa "reparando en cuanto sea posible los graves daños sufridos por las conciencias católicas". (256)

Mayor utilización de las prescripciones del Dr. MURIZ PABLOS que la realizada por los prelados de Orense y Zaragoza haría el obispo de Barcelona, quien, destacando como aquellos coincidían con lo señalado por el mismo reiteradamente y pidiendo a los párrocos que las leyera a los fieles, las hacía directamente suyas, exhortando, al tiempo, a todos sus diocesanos a que procuraran la fundación de nuevas escuelas particulares católicas y la ayuda a las existentes, de acuerdo con el "Comité diocesano de Escuelas". (257)

Fue el obispo de Tortosa el último en publicar -según los boletines diocesanos consultados- las oportunas normas de desarrollo de las directrices contenidas en el documento colectivo de 25 de mayo en materia de asistencia a las escuelas, y lo haría en un texto en el que conjuntamente trataría este tema, el de la organización de la Acción Católica en la diócesis y el problema del sostenimiento del culto y clero.

En lo que se refiere a la cuestión de la enseñanza comenzaba el prelado señalando que este era el problema más grave entre todos los que podían presentarse a la Iglesia y,

(256) 11 de octubre de 1933, "Circular núm. 17, Sobre las escuelas católicas", BOE de Zaragoza, año 72, 16 de octubre de 1933, núm. 21, págs. 338-341.

(257) s.f. "Las leyes de la Iglesia Católica acerca de la instrucción religiosa de la niñez y de la juventud", BOE de Barcelona, año 76, 16 de octubre de 1933, núm. 19, págs. 346-351. Se producía aquí una utilización inversa a la realizada en el mes de abril del contenido de los boletines de estas dos diócesis y que hemos señalado en la nota 235.

así, a diferencia del enfoque dado por el arzobispo de Valencia, decía, con expresión más apoyada en la simple actuación humana que en cualquier intervención providencial, que la actuación política seguida en materia de educación podía producir unos males "casi" irremediables:

"Problema fundamental, el más hondo y de más tremendas responsabilidades y consecuencias, es este de la enseñanza católica. Las más catastróficas conmociones sociales, los ataques más duros, la misma persecución sangrienta contra la Iglesia, suelen tener remedio más o menos pronto, y siendo muy de lamentar, producen ordinariamente un afianzamiento de la fe, purificada en la prueba. Pero si por instituciones públicas y una presión meditada y constante, se arrebatara a la Iglesia sus facilidades para enseñar, y muchos de sus hijos se crían sin el alimento saludable de una enseñanza buena, los males son casi irremediables."

Por tal razón urgía hacer frente a esta situación con todo empeño, mediante la cooperación personal y "con todos los medios económicos disponibles".

Oscuras eran las expresiones que realizaba a continuación, por cuanto atribuía a "otros" la realización de cierto tipo de actividades de amplio espectro que, además, declara que había que apoyar. Lo ambiguo de sus palabras puede inducir a pensar que contenía una velada alusión a los partidos políticos confesionales (si así fuera, se trataría de una proclamación -aunque ciertamente encubierta- del apoyo eclesiástico a tales partidos, lo que haría que el obispo de Tortosa fuera el único, entre aquellos cuyos documentos oficiales hemos examinado, en declarar su apoyo a cuanto estos pudieran hacer en la lucha contra el problema planteado a la enseñanza católica). Sin embargo, hay que señalar que el Dr. Félix BILBAO se refería a instituciones católicas vinculadas

a la organización eclesial más vastas que las diocesanas, tales como la Federación de las "Asociaciones de Padres de Familia", la de "Amigos de la Enseñanza", creada para afrontar, a nivel nacional, la sustitución de las ordenes religiosas en la enseñanza, o la de "Estudiantes Católicos". Lo hermetico de su expresión impide descubrir el verdadero significado de sus manifestaciones, aunque nos inclinamos a creer que estas se referían a dichas organizaciones de carácter nacional, vinculadas a la Acción Católica, toda vez que al referirse a "nuestras posibilidades" más que significar las de la Iglesia (lo que hubiera clarificado, por contraposición, la posible referencia a organizaciones políticas) parece querer tratar de las exclusivamente diocesanas, -más modestas e inmediatas- dadas las actuaciones que luego recomendaba hacer y que se ceñían al ámbito territorial de su jurisdicción y habida cuenta, además, que la Acción Católica proyectaba por aquellas fechas la realización de una campaña nacional "para la Ley de Congregaciones."⁽²⁵⁸⁾

"Dejando a otros buscar remedios de carácter más general y emprender campañas de otro orden -a las cuales tampoco hemos de negar nuestra cooperación fervorosa-, pensemos lo que se halla más cerca de nuestras posibilidades, para ponernos en ello inmediatamente."

Plasmadas sus intenciones en estas ambiguas frases quería el prelado resaltar que dos eran los grandes instrumentos de la enseñanza cristiana: la escuela y la catequesis. En base a ello, y dado que las detentadas por religiosos ("privados contra todo derecho natural y eclesiástico y contra toda conveniencia económica, de ese gran medio de hacer el bien") habían de sustituirse, a fin de que quedase garantizada la enseñanza católica señalaba como en muchas partes se había utilizado con éxito "la

formación por padres de alumnos de asociaciones de enseñanza, legalmente constituidas, que se hagan cargo de dichos colegios, encargándolos a maestros o profesores de confianza", actuación que, por tanto, recomendaba a sus diocesanos al tiempo que les insistía en que habían de favorecer todo lo posible a las escuelas católicas privadas existentes.

Hechas estas recomendaciones procedía el obispo a dictar las normas a que los fieles habían de atenerse en el caso de que no existieran en su localidad tales escuelas, a cuyos efectos distinguía, por un lado, a aquellas a cuyo frente estuvieran maestros "prácticamente católicos": de ellos se podía esperar que "aun dentro del cumplimiento de una ley tan opresora" sus enseñanzas no fueran contrarias a la formación religiosa y moral de sus alumnos, por lo que en tal caso podía "tolerarse la falta de escuela católica", con tal que la enseñanza religiosa se diera en los niños por otros medios; mas, por otro lado, podía haber escuelas en las que el maestro no inspirara "tal confianza", en tal caso urgía la organización de una escuela privada y si ello no era posible, los niños católicos, de todas formas, no podían asistir a la oficial.

El remedio que el prelado proponía en tales casos era el de llenar las horas de los niños con más formación moral y religiosa, apuntando la idea de organizar para ellos unas intensas clases de enseñanza doctrinal en las que, indirectamente, podrían recibir una formación "literaria". Se trataba, pues -y aquí si parece quedar claro- no de una escuela religiosa sustitutoria (como hemos visto confusamente diseñada por los prelados de Santiago y Orense) sino de una escuela de religión con escasos aditamentos de otro orden, lo que (aunque el prelado no descienda a analizar posibilidades legales), si bien podía ampararse en la facultad legal concedida a la Iglesia por el artículo 48

de la Constitución y el 20 de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, difícilmente podía mantenerse ante el mandamiento constitucional sobre obligatoriedad de la enseñanza primaria.

"Mas vale la ignorancia que el error positivo, y para un padre católico no faltarán medios de que su hijo aprenda lo preciso, dedicando el tiempo en que no pueda asistir a la escuela oficial, a esa formación moral religiosa mas intensa. No sería difícil organizar, para tales niños, clases diarias, aun por mañana y tarde, de formación religiosa, con lo cual, el curso no sería perdido para su formación aun literaria, que indirectamente podría procurarse."

Tras estas drásticas soluciones en las que el obispo, dejando al margen la autorización eclesial previa establecida por el de Orense, pasaba a exigir mayores requisitos a los maestros que los fijados por el resto de los obispos, establecía el deber de que todos los parrocos instruyeran en estas directrices a los padres de familia "haciendo que sientan todo su peso y convenciendoles de que con un poco de buena voluntad y la union de esfuerzos de todos los interesados en este vital asunto, se puede conseguir muchísimo". Lo que era una invitación directa, dadas las drásticas medidas dictadas, a que se aprestaran a colaborar en la creación de escuelas privadas católicas.

Acababa el prelado indicando la necesidad de hacer una estadística de los niños que asistían a la catequesis, debiendo alcanzarse que fueran todos los de cada feligresía y estableciendo que estas enseñanzas se dieran, al menos, tres días a la semana, caso de no poder ser diarias. (259)

(259) 15 de octubre de 1933, "Carta abierta a nuestros venerables señores Curas y al Clero en general sobre el plan para el nuevo curso de trabajo", BOE de Tortosa, año 75, 16 de octubre de 1933, núm. 17, págs. 149-150.

18. La continuación de las pastorales exponiendo la doctrina de la Iglesia en materia de enseñanza religiosa y dictando normas de organización, agosto-noviembre: obispos de Segovia, Madrid-Alcalá, Orense, Sevilla y Palencia.

Fundamentándose en la promulgación de la ley de Confesiones y Congregaciones religiosas y en la actividad desplegada por la Administración para llevar a la práctica lo preceptuado en ella, el Dr. Luciano PÉREZ PLATERO dictaría el 14 de agosto su primera pastoral sobre la enseñanza en la que, al tiempo que criticaba la nueva disposición, insistía especialmente en el tema de la formación religiosa en relación con la escuela primaria.

No queremos dejar de llamar la atención sobre las desusadas apoyaturas argumentales del discurso del Dr. PÉREZ PLATERO que, si acordes con el pensamiento del catolicismo de la época, no habían sido hasta ese momento esgrimidas con tanta contundencia por los demás miembros del episcopado, que preferían (al margen de sus propias consideraciones más o menos basadas, según los casos, en el conservadurismo de su personal pensamiento) traer a colación, para fundamentar sus palabras, citas de textos de mayor actualidad. En este sentido, dos textos llaman especialmente la atención en la pastoral del obispo de Segovia; en el primero de ellos (si bien aludía a "los padres" en toda su argumentación en defensa del derecho de la familia a enseñar a su prole) no encontraba obstáculo en reafirmar sus razonamientos citando unas iras de Santo Tomás, verdadero canto al patriarcado y

que chocan tanto con el cuidado que otros prelados venían demostrando en responsabilizar tanto a los padres como, especialmente, a las madres de la educación cristiana de sus hijos, como con el protagonismo que en la II República comenzaron a tener las mujeres, y del que es paradigmática la discusión parlamentaria en torno al voto femenino del que las izquierdas estaban tan recelosas por la influencia, precisamente, que el estamento eclesial podía ejercer sobre ellas.⁽²⁶⁰⁾ Alusión poco política, pues, la del prelado para atraer a las mujeres, aunque sin duda fácilmente asumible por las católicas de la época, máxime en una diócesis bastión del pensamiento tradicional, como Segovia.⁽²⁶¹⁾ El otro texto, al que acompaña la reflexión del propio prelado sobre la imposibilidad de salvación fuera de la Iglesia católica, era más acorde con la filosofía del catolicismo de la época, pero no dejaba de proclamar, basándose en una encíclica de León XIII de medio siglo atrás, una excesiva infalibilidad eclesiástica no solo en materia de fe sino también en lo que atañía a la "institución de las costumbres", (que no conductas) infalibilidad que si también era defendida implícitamente por el resto del episcopado, no había sido esgrimida hasta ese momento en el ámbito de la enseñanza tan claramente ni con semejante amplitud, quizá en aras a lograr cierta concordia en un tiempo de defensa de la

(260) Ver en este sentido CAPEL, Rosa M^a, op. cit., págs. 156-211.

(261) "Dice el Doctor angelico con su acostumbrada nitidez de pensamiento y precisión de estilo: "El padre carnal participa singularmente de la razón de principio, la cual de un modo universal se encuentra en Dios... El padre es principio de la generación, educación, disciplina y de todo cuanto se refiere al perfeccionamiento de la vida".

libertad de conciencia y pensamiento, que habia hecho a la jerarquia inclinarse mas por demostrar la necesidad de la fe para la salvacion y lo inexcusable de las enseñanzas de la religion catolica para las rectas costumbres humanas, que su absoluta ausencia de error en este ultimo punto, lo que venia a descalificar, tácitamente, las costumbres sociales derivadas de otras creencias religiosas, incluso de carácter cristiano.***

Defendiendo, en primer lugar, el derecho de todo ciudadano a opinar y criticar las leyes, aludia al deber de la jerarquia de señalar a los fieles "los acuerdos abusivos y las medidas arbitrarias" de la nueva norma, que los catolicos no podian aceptar "por cuanto lastiman nuestras creencias y desconocen las facultades soberanas y la mision divina de la Iglesia", como ya se habia puesto de manifiesto por el Papa en la enciclica "Dilectissima Nobis" y por el episcopado español en su ultimo documento colectivo, siendo su proposito ahora ceñirse al tema de la enseñanza de los niños y, singularmente, a la cuestion de la enseñanza religiosa en las escuelas, de las que, dada su importancia por ser el primer eslabon donde se formaban las conciencias, todos los partidos y sectas anticlericales querian apoderarse, siendo en España el primero en realizar esta labor el propio Estado al introducir el laicismo en la enseñanza.

(262) "Por tanto, en el objeto propio de su misión educativa, o sea, en todo lo que concierne a la fe e institución de las costumbres, el mismo Dios ha hecho a la Iglesia partícipe del divino Magisterio y, por beneficio divino, inmune de todo error; por lo cual es maestra de los hombres suprema y segurísima, y en sí misma lleva arraigado el derecho inviolable a la libertad de enseñar" (Enciclica "Libertas", 20 de junio de 1888).

Ello hacia que la labor de educar a los niños recayera en sus padres y en la Iglesia, instancias a las que por ley natural y por mandato divino, respectivamente, incumbia realmente la enseñanza que, segun "todos los tratadistas de derecho, no influidos por los errores liberales y partidismos de secta" y segun "los canones de la logica y... la doctrina verdadera" no era necesariamente competencia del Estado.

Eran los padres, como autores de la vida del niño, los primeros responsables de su educacion, bien directamente o bien apelando a la ayuda de otras personas a través de la escuela, que, asi, no era mas que un suplemento de la tarea que les incumbia, por lo que los maestros no eran otra cosa que auxiliares y delegados de las familias para enseñar a la niñez, debiendo estar, en consecuencia, supeditados su nombramiento y remocion, y aun su conducta, a la voluntad de aquellas.

Al ser este un derecho natural inherente a los padres el Estado no solo no podia atentar contra el sino que debia protegerlo, garantizarlo "y facilitar auxilios y medios" para su desarrollo.

Mas, junto a esta responsabilidad paterna y segun mandato divino, poseia la Iglesia "titulo preminente para intervenir en la educación de todos los hombres", debiendo todos obedecerla porque -segun la doctrina tradicional del catolicismo- "fuera de la ley y de las enseñanzas y de la moral de la Iglesia no hay salvacion", siendo ella la que engendraba, espiritualmente, por el bautismo, comunicando a los hombres la vida sobrenatural, de ahí su derecho y obligacion de darles las enseñanzas acordes con esta vida.

La Iglesia estaba, además, como ya hemos apuntado, libre de error en lo que atañía a la fe y a la "institucion de las costumbres", y este privilegio divino le hacia poseer primariamente el derecho a la educacion, incluso por encima de la autoridad de los padres, no estando condicionada en su ejercicio por ninguna ley ni potestad terrena.

Este derecho no se ceñia unicamente "a la fe y a las costumbres" sino a toda otra disciplina y ensenanza humana, pues la Iglesia podia juzgar lo que era provechoso o contrario a la educacion cristiana, ya que "toda ensenanza, lo mismo que toda accion humana, tiene necesaria conexion y, por tanto, no puede sustraerse a las normas de la ley divina, de la cual es custodia, interprete y maestra infalible la Iglesia" que, al ser sociedad perfecta e independiente, podia señalar sus propias facultades en este ambito y así lo hacia explicitamente en su Código Canónico.⁽²⁶³⁾

Contrariamente a todo ello al Estado no le correspondia la educacion, al no ser autor de la vida natural ni de la sobrenatural, debiendo unicamente ampararla y promoverla "sin absorber nunca ni conibir a la familia y a la Iglesia, y mucho menos suplantarias".

"Como custodio que es de los derechos de la familia y protector de los derechos de la Iglesia, el Estado tiene el deber de asegurar a la Iglesia y a la familia el pleno ejercicio de sus derechos propios, y de proporcionarles medios abundantes de practicarlos, pero no puede atribuirseles a sí mismo y confiscarlos en su provecho."

(263) El prelado transcribia aquí los cánones 1375 y 1378, que ya hemos recogido. (Ver el apéndice núm. 6).

Y ¿qué hacia en este sentido el Estado español? La disparidad con los deberes que el Dr. PÉREZ PLATERO le atribuía era evidente, pues no solo pretendía establecer su monopolio docente por medio de "la escuela única y obligatoria" a la que compelia a ir por medio de las mayores coerciones, según el prelado -que exageraba aquí deliberadamente y fraudulentamente la actuación estatal obviando, además, toda referencia a la posibilidad reconocida por el artículo 49 de la Constitución a la que, sin embargo, y en franca contradicción con su discurso, más adelante acudirá- sino que, además, tal escuela era de carácter laico, lo que era, en realidad, el mayor mal en el diseño del programa educativo estatal, en el que incluso podían admitirse el monopolio y la obligatoriedad "si se enderezasen a un fin honesto y bueno"; paradójica afirmación del obispo al ser la antítesis de cuanto ha acabado de decir en defensa de la suprema autoridad y libertad de la Iglesia en materia de enseñanza.

"Luego el *monopolio docente del Estado*,¹²⁴⁴ por el cual la instrucción pública se convierte y degenera en un ramo de la administración, y el Estado se erige en educador único de la niñez, y se arroga toda la autoridad en esta materia, es un entrometimiento insoportable y arbitrario en terreno de otro, y una vejación injusta no solo de la Iglesia, sino también de los padres en su atribución inviolable y sagrada de educar a sus hijos como ellos quisieran.

«Luego la *escuela única y obligatoria*,¹²⁴⁵ por la cual todos los niños, so pena de que sus padres o tutores se vean castigados con amonestaciones y multas y cárceles, estarán obligados a frecuentar las escuelas del Estado y a recibir la enseñanza

que el Estado les quiera dar por medio de funcionarios que el mismo nombra, después de haberlos formado el mismo, y que todos los ciudadanos pagan, es un atropello flagrante de la ley natural y de la ley divina, y un abuso de fuerza por parte del Estado, armado de todas armas, hasta del rayo que mata, contra la sociedad y los individuos, desprovistos de toda defensa, hasta del escudo que protege.

«Luego la escuela laica,⁽²⁶⁵⁾ de la cual toda influencia sobrenatural y toda intervención de la Iglesia están excluidas en absoluto, y en la cual todo lo que se enseña trasciende a racionalismo positivista y ateo, es la mayor injuria que puede hacerse a los derechos del niño, tanto más respetables cuanto más indefensos, y el ataque más temeroso que puede darse a la libertad de los padres.

«Este es el fin príncipe de todo sistema y de todos los sectarios: la escuela laica. El monopolio docente del Estado y la enseñanza obligatoria no son más que medios; por eso podrían tolerarse, si se enderezasen a un fin honesto y bueno. Pero la escuela laica es esencialmente descristianizadora e irreligiosa, aun la más templada y que más rigurosamente se atiene a lo que su nombre significa.»

La escuela laica significaba escuela sin Dios y en ella se destruía la fe de la infancia no porque se atentara contra la religión sino, simplemente, porque no se la enseñaba, persuadiendo a los niños de que "puede uno ser hombre honrado y buen ciudadano sin necesidad de ley alguna heteromana, o sea, de origen superior, y prescindiendo de

(265) En bastardilla en el original.

todo fin ultraterreno"; la realidad, según el obispo, era muy otra y, así, llegara a afirmar que "la escuela laica menos exaltada y más severa es una máquina infernal de hacer incrédulos y libertinos".

"La inviolabilidad de la conciencia del niño, el respeto a todas las ideas, la equiparación de todas las confesiones son el manto hipócrita con que los laicistas pretenden encubrir sus verdaderos fines, su propósito deliberado de arrojar a la religión de la sociedad y arrancarla del corazón y del alma del niño. Los mismos defensores del laicismo en la escuela lo reconocen y lo confiesan con plausible y ruda franqueza." (265)

Esta era la enseñanza que, según la Constitución, había de darse y se estaba ya dando, habiéndose iniciado un paso más al establecer la ley el cierre de todas las escuelas de

(265) Aquí citará el prelado un párrafo de la circular de Julio Ferry por la que se instauró la escuela laica en Francia -y un texto del que llama "su gran confidente y principal inspirador", Pablo Bert, en el que se explica que la pretendida neutralidad por la que abogaba tal circular no fue más que "una mentira necesaria", siendo la finalidad de la doctrina del libre pensamiento "la ruptura completa de la sociedad y la religión". Frase que si hubiera incluido el calificativo de "civil" tras el término "sociedad" hubiera delimitado el objetivo perseguido pero que, al no hacerlo, podía implicar un propósito más amplio de consecución de una sociedad agnóstica y no el de la mera separación de la Iglesia y el Estado, finalidad aquella en la que el obispo insistía mediante la cita de otro texto, del que no revela al autor, ("otro insigne portavoz del sectarismo"), y en el que se señala que la escuela laica "es una máquina de guerra contra el catolicismo", teniendo por objeto el "formar librepensadores y anticristianos" por lo que sería una defraudación "si se mantuviera dentro de una respetuosa neutralidad". "La escuela laica -concluía la cita- es un molde, donde se mete un hijo de un cristiano y se saca un renegado". Los pensadores cristianos, añadía el obispo, citando a Menéndez Pelayo, pensaban, por el contrario y unánimemente, que para que la educación fuera buena y socialmente útil había de ser profusamente religiosa.

los Institutos religiosos, estrechando el laicismo el cerco para obligar a los niños a ir a sus escuelas.

Ante ello los padres de familia debían reaccionar para promover la educación cristiana de sus hijos, y como no era fácil que pudieran hacerlo por sí mismos en la mayoría de los casos, debían resolverse urgentemente a prestar su auxilio moral y material para la fundación y sostenimiento de escuelas católicas, procediendo donde no pudieran establecerse, -"como acontece en los pueblos"-⁽²⁶⁷⁾ a ponerse en contacto "con la autoridad eclesiástica del lugar" a fin de organizar la escuela de la parroquia, a la que mandarían a sus hijos para que recibieran la oportuna formación religiosa durante el tiempo y los días que el párroco fijase.⁽²⁶⁸⁾

Mas incluso esto era difícil de realizar en la debida forma y con suficientes garantías de duración y éxito si los padres no aunaban sus esfuerzos, por lo que debían integrarse en la "Asociación Católica de Padres de Familia", que ya existía en la diócesis, y la cual, bajo su dirección, proveería la forma de construir la escuela parroquial y de regentarla "con la mayor economía posible".

(267) Es difícil precisar el fundamento de esta afirmación del prelado, aunque probablemente estaría basado en razones económicas.

(268) Como se ve, el diseño de escuela parroquial del obispo de Segovia parece contraerse exclusivamente a la enseñanza religiosa si bien deja abierta su forma definitiva a las determinaciones de la "Asociación Católica de Padres de Familia".

Acababa el Dr. PÉREZ PLATERO su pastoral exhortando a los sacerdotes y a todos los fieles a colaborar, por medio de la Acción Católica, con esta actuación de los padres.⁽²⁶⁹⁾

Un solo prelado, entre los consultados, dedicaría durante el primer bienio de la segunda República un documento específico sobre la educación de los adolescentes y jóvenes, tema que compartiría con el de la necesaria sustitución de los religiosos,⁽²⁷⁰⁾ si bien sin traer de él su consecuencia y con tratamiento totalmente independiente. Tal hizo el Dr. EIZO y GARAY, obispo de Madrid-Alcalá en el mes de agosto.

(269) 14 de agosto de 1933, "El deber de la enseñanza religiosa", BDE de Segovia, año 78, 16 de agosto de 1933, núm. 15, págs. 353-366.

Hasta octubre de 1933 no volvería hacerse en el boletín de la diócesis alusión alguna al tema de la enseñanza -salvo la escueta noticia de la conferencia organizada por la "Asociación de Padres de Familia" a la que aludimos al referirnos a las realizaciones prácticas-, esta alusión, por otra parte tan solo era una referencia a la estadística de las escuelas católicas en Francia publicada por "La Croix", el 17 de septiembre, que el redactor del boletín consideraba encerraba "interés y fuertes sugerencias" y de la que se deducía que el número de alumnos de la escuela católica, sostenida con el esfuerzo de los fieles, sobrepasaba ampliamente al de la escuela oficial (s.f. "Dios en la escuela. Una estadística aleccionadora", BDE de Segovia, año 78, 16 de octubre de 1933, núm. 19, págs. 441-443). La referencia a la situación escolar en Francia la había iniciado, sin embargo "El Debate" en un suelto, publicado en el mes de mayo que aludía, según noticia tomada de "Le Temps" a la escasa asistencia de niños a las escuelas oficiales pese al esfuerzo hecho en esta materia por el gobierno francés, ("Los resultados en Francia", "El Debate", 19 de mayo de 1933). Los editoriales que este periódico dedicó en 1933 al tema de la enseñanza se refirieron reiteradamente al "fracaso del laicismo francés".

(270) Ver el apéndice sobre las órdenes y congregaciones religiosas.

A diferencia de las quejas que, como más adelante veremos, formularía el obispo de Palencia sobre la inercia de sus diocesanos, comenzaría el de Madrid declarando su gratitud por la generosidad de los fieles, tanto en sus donativos para las escuelas católicas como en la colaboración personal brindada por muchos de ellos, gracias a la cual había sido posible "sostener las escuelas ya fundadas (muchas de las cuales se hubieran cerrado por faltarles las subvenciones oficiales con que se les ayudaba, o los donativos de bienhechores, cuyos intereses han padecido grandes quebrantos) y crearse otras nuevas, mejorar los locales y el material de enseñanza y multiplicar las catequesis para suplir en lo posible la falta de instrucción religiosa en las escuelas oficiales".

Todo ello no era, sin embargo, bastante, pues aun quedaban muchos niños sin escuela católica lo que, unido a la prohibición de enseñanza a las órdenes y congregaciones religiosas, agravaba enormemente el problema, por lo que el prelado pedía a sus diocesanos que se inscribieran en la "Asociación de Cruzados de la Enseñanza", creada fundamentalmente para afrontar la sustitución de las órdenes religiosas,⁽²⁷¹⁾ lo cual no excluía ni la existencia de la "Asociación de los padres católicos de familia", ni la contribución para las escuelas católicas.

(271) Ver el apéndice citado.

Singular atención merecía la cuestión de la enseñanza catequista, de la que señalaba que se había intensificado desde que publicó su pastoral de 24 de abril de 1932, tanto por el aumento de las escuelas como por el de catequesis; mas no era de esta enseñanza de la que se proponía hablar pues, aunque aún debía incrementarse, sobre todo para los niños que no asistían a escuelas católicas, de ello trataría cuando explicara la reorganización de la "Archicofradía de la Doctrina Cristiana" que estaba realizando. El motivo central de su pastoral no era ahora la formación de la infancia sino la adecuada educación de la juventud.

Partiendo de la premisa de que los padres y madres de familia debían ser los primeros en instruir religiosamente a sus hijos,⁽²⁷²⁾ labor indispensable para completar la instrucción catequista de la escuela o la parroquia, señalaba que "era error gravísimo, cuyas lamentables consecuencias estamos tocando" el creer que bastaban escuela primaria y catequesis para la debida formación: la causa principal de la ignorancia y, por tanto, de la indiferencia o incluso aversión religiosa era el que no se siguieran adquiriendo conocimientos religiosos durante la edad adolescente y adulta.

(272) Alababa el obispo los hogares en que se dedicaba un rato todos los días a la explicación de la doctrina "dada personalmente por el jefe de familia" o por la lectura: "¡Benditos los hogares -decía- en que así se forjan ciudadanos para la Patria y para el cielo!", frases en que destacan, pese a su anterior alusión tanto a los padres como a las madres, tanto el concepto tradicional eclesialístico de familia patriarcal, como la proverbial simbiosis entre religión y buena ciudadanía.

Por ello, abordando en primer lugar la formación de los adolescentes que no cursaban regularmente estudios, señalaba que al fomento de la formación post-escolar en la familia, o su suplencia donde no se diera, se había dedicado la "Segunda Asamblea Catequística diocesana" celebrada en 1928, cuyas conclusiones debía el clero aplicar en esos momentos "con mas empeño aún que entonces, por ser mayor la necesidad"; por otro lado, había dispuesto que en los "Centros de Juventudes Católicas", tanto femeninos como masculinos, -cuyo establecimiento en todas las parroquias esperaba- se impartieran cursos sistematicos de religión "con arreglo a la cultura y condición social de los alumnos" y había aprobado un "Plan de Escuelas de Religión e Historia Sagrada" que ya funcionaba en algunas parroquias y centros docentes de Madrid; ahora establecía, por último, que los directores de "Asociaciones católicas juveniles" organizaran cursos de Religión "en los que metódicamente aprendan las doctrinas de nuestra fe y su defensa contra los errores e impugnaciones de nuestros dias".

En segundo lugar se referia el obispo a la formación de los estudiantes de la segunda enseñanza oficial, cuya cultura religiosa debía ser "proporcional a la profana, si han de quedar a salvo de multitud de errores", razón por la que la Iglesia había previsto lo señalado en el canon 1373, para cuyo mejor cumplimiento ampliaba las clases de religión para los alumnos oficiales de los Institutos de Segunda Enseñanza a cuyos efectos señalaba las fechas de matrícula en todas las parroquias de Madrid, debiendo los párrocos dar todas las facilidades a los que fueran a inscribirse y no solo recordar desde el pulpito los deberes de los padres respecto a la formación de sus hijos, sino cuidar de que en el conlesionario se les inculcara estas obligaciones y dirigirse personalmente a las familias católicas incitando a matricular a sus hijos.

La "Federacion de Estudiantes Catolicos" debia hacer que todos sus miembros se inscribieran en los cursos de religion, esperando de su celo y del de la "Asociacion de Padres Catolicos de familia" y de los "Cruzados de la Ensenanza" el logro de que los alumnos oficiales del bachillerato se matriculasen en las mencionadas clases "que solo para ellos se han fundado".

Trataba el prelado seguidamente de la formacion religiosa de los alumnos de Colegios catolicos, que deberian conceder a esta un lugar preeminente. Si dichos colegios querian seguir ostentando su condicion de confesionales debian remitir al episcopado determinados datos sobre las clases impartidas y comunicar la fecha de los exámenes para que asistiera a ellos un delegado episcopal.

Y, por ultimo, entraba el obispo en el analisis de las medidas a implantar en la ensenanza universitaria comunicando su proyecto de crear un "Centro de Estudios Religiosos" y recomendando, mientras tanto, que los estudiantes asistieran a los cursos y conferencias impartidos en la "Casa del Estudiante", en la "Institucion del Divino Maestro" (normalistas) en el "Centro de Estudios Universitarios" y, preferentemente, a los "Cursillos de Cultura religiosa", para caballeros y para señoras, organizados por el cabildo catedral "con tan brillante exito, aceptacion y concurrencia".

Concluía el Dr. EIJÓ y GARAY constatando la falta de formación religiosa de los católicos españoles:

"Hay que acabar con la ignorancia religiosa de tantos católicos inconscientes que casi desconocen la fe que profesan, que asisten a cultos sagrados que apenas entienden, y que si bien, en el mejor de los casos, están prontos a dar la cara por la religión, no pueden dar razones que la ilustren y la vindiquen.

...

"Si es triste, tristísimo, que nuestros enemigos las desconozcan y por eso las ataquen, no lo es menos que tan somera e irreflexiblemente las conozcan muchos de los fieles."

Por ello, reiteraba, había que esforzarse en pro de la educación de la juventud, "cruzada" a la que nadie podía ser ajeno y de cuyos frutos eran especialmente responsables los padres: "pensad que habeis de dar cuenta a Dios de si habeis hecho que vuestros hijos utilicen los medios de formación religiosa que a su disposición ponemos, o por vuestra incuria hemos trabajado en balde". La Iglesia, pues, había cumplido bien que, según lo que hemos visto expresado por otros prelados (El Dr. EIJÓ y GARAY no entraba en consideraciones sobre las causas de la ignorancia que constataba), motivada por las nuevas circunstancias; ahora tocaba a sus hijos responder. (273)

(273) 20 de agosto de 1933, "Exhortación pastoral acerca de la enseñanza de la doctrina cristiana", BOE de Madrid-Alcalá, 1 de septiembre de 1933, núm. 1590, págs. 305-318. Esta pastoral fue glosada en el editorial de "El Debate" de 2 de septiembre titulado "Normas concretas de actuación escolar".

Si bien habia esperado a la cercana apertura del curso escolar de 1933 para establecer las bases de la organizacion de la enseñanza religiosa en la diocesis de Huesca, no cabe duda que las normas dictadas por el Dr. Mateo COLOM y CANALS fueron las mas prolijas, duras (llegando a amenazar a los maestros con la pena de excomunion, como se vera) minuciosas y estructuradas de todas las dadas por el episcopado español, siendo decretadas bajo el título de "Ley diocesana". Asi lo hizo por medio de una pastoral en la que explicaba a los rielees las razones de su implantacion, en la que, tras defender el derecho de la Iglesia a enseñar su doctrina, dado el mandato de su fundador -derecho irrenunciable que habia de ejercer pese a todos los obstaculos y que no precisaba de reconocimiento alguno por la autoridad humana- llegaba a denunciar que las medidas politicas adoptadas en España contra ella eran tales que bastarian para destruirla de no ser por la ayuda divina:

"Con todo, es dolorosamente cierto, VV.HH. y amados hijos Nuestros, que en la hora presente, la condicion de la Iglesia Catolica en nuestra amadisima Patria es poco favorable al ejercicio de la mision educadora que por derecho le corresponde. Las leyes ultimamente promulgadas por el Estado español, (ya lo habeis oido a Nuestro Santisimo Padre el Papa Pio XI, felizmente reinante, y a los Excelentisimos Señores Metropolitanos, portavoces de todo el episcopado español, y de todos los catolicos nuestros compatriotas, han colocado a la Iglesia en una situacion tal que a no ser cierto que no puede faltarle la asistencia divina, seria suficiente para destruirla."

La actuación de la República en el concreto aspecto de la educación había sido claramente denunciado en la encíclica "Dilectissima Nobis"⁽²⁷⁴⁾ y contra ella se alzaban las voces de los padres de familia "que veían atacado el santuario de su hogar por las huestes del error y del mal, y sentían el doloroso temor de que la inocencia y la fe de sus hijos se hallaban seriamente amenazadas". Ante tales hechos era preciso defender el patrimonio espiritual de la Iglesia por lo que, para hacerlo de forma efectiva, había decidido dictar la "Ley diocesana sobre la enseñanza de la doctrina cristiana a todos los fieles, niños y adultos".

Esta "ley" constaba de 39 artículos estructurados en cinco títulos. Era el subtítulo del primero "De la obligación de enseñar la doctrina cristiana" y en su preámbulo exponía el obispo como había sido preocupación constante de la Iglesia encarecer a los padres de familia y a cuantos tenían encomendada la dirección de jóvenes la responsabilidad que les atañía sobre su orientación hacia el bien religioso y moral, responsabilidad extensiva a los sacerdotes respecto a la instrucción en la fe a los fieles que tenían confiados. Si siempre había sido necesario inculcar estas obligaciones "hacese hoy mas apremiante y grave el repetir las mismas llamadas, para que todos recuerden y tengan presentes no solo en la memoria, sino en un cuerpo legal estricto, estos sagrados deberes", razón por la que pasaba a reconducir a los preceptos que dictaba lo establecido por el Código de Derecho Canónico, por los pontífices y por los obispos de esa misma diócesis.

(274) Ver el apéndice "Los documentos de carácter genérico de la jerarquía en 1939".

En tales preceptos proclamaba el prelado el derecho de todo cristiano a ser instruido en la fe, por lo que cuantos tuvieran autoridad sobre sus semejantes -y especialmente los padres o quienes hicieran sus veces- estaban obligados a proporcionarles aquella instrucción. Todos los maestros, por su parte, "aun oficiales del Estado, provincia o municipio", estaban obligados "a no enseñar nada contrario a la Doctrina católica y a la moral cristiana", siendo castigados los contraventores de este precepto "con penas razonables, aun con la excomunión reservada al Ordinario". Los sacerdotes, en fin, tenían el deber de enseñar la doctrina evangélica en la forma que determinaba, tanto en lo que se refería a las homilias de la misa dominical como a la frecuencia de la enseñanza del catecismo, tema este último al que se refería minuciosamente el articulado del título II, "Del catecismo de los niños", con normas similares a las que ya hemos visto establecidas en otras diócesis.

El título III, subtítulo "De la enseñanza de la Religión en las escuelas, colegios y academias", destacaba en su preámbulo la insuficiencia de la enseñanza del catecismo y la necesidad de completar aquella en la juventud.

"El desarrollo de su inteligencia, la atención a cuidados superiores, los estudios, hacen que el joven necesite entonces una dirección especial. Si a esto se añade el despertar, bravo y dominante de las pasiones, se verá con cuánta razón se ha interesado siempre la Iglesia por estos jóvenes incipientes, y por que ha exigido la libertad y apoyo precisos para dirigir sus conciencias."

Esto, que invariablemente había sido así, se hacía especialmente acuciante ante la política educativa vigente en España, por lo que la Iglesia, imposibilitada de hacerle

frente por sí, debía pedir a los fieles que, instituyendo centros de enseñanza, lucharan contra el laicismo imperante:

"Sube de punto el peligro, y se hace por ello más apremiante la necesidad de combatirlo, en esta hora de tristes aspectos en el orden educativo, en nuestra Patria. Las escuelas, institutos y universidades del Estado son laicas;⁽¹⁷⁵⁾ es decir: en ellas *no se enseña religión*; ⁽¹⁷⁶⁾ la *moral* que se prescribe, *no es cristiana*,⁽¹⁷⁷⁾ y a veces *no será moral*; ⁽¹⁷⁸⁾ no puede serlo para quienes sabemos que no puede darse verdadera moral fuera de la religión, porque aquella deriva toda su fuerza de esta.

"La Iglesia no puede abrir las escuelas y colegios que quisiera; porque el Estado no se lo permite, y porque no tiene tampoco potencia económica para realizar esta obra. Pero sí puede, y debe, pedir a sus hijos que la ayuden a defender el patriotismo de la fe en sus jóvenes; sí puede orientar a aquellos, que están habilitados para abrir y sostener centros de enseñanza libre, en la misión, por penosa mas agradable a Dios, de lucha contra la avalancha laicista y sectaria de nuestro tiempo."

Por todas estas razones procedía el prelado a estructurar en preceptos todo cuanto podía atañer a la formación religiosa en la enseñanza secundaria estableciendo que era "obligación sagrada... de todos los directores, maestros, propietarios e inspiradores de cualquier centro de enseñanza libre... enseñar adecuadamente la Doctrina católica...", correspondiendo al Ordinario ordenar tal ense-

(175) En bastardilla en el original.

nanza, que debería ser la asignatura más importante en las escuelas católicas. Los alumnos de los colegios y academias en que se estableciera como reglamentaria la religión debían asistir por lo menos dos veces por semana a una explicación de doctrina, cuyo texto y profesores serían aprobados por el prelado, y efectuar un examen a final de curso. Ningún sacerdote podría tener relación profesional con centros donde no se enseñara la religión en la forma que quedaba prescrita. Los "padres de familia, mutuas escolares u otras sociedades y agrupaciones" que desearan fundar o sostener centros de enseñanza, deberían solicitar la aprobación de la curia diocesana remitiéndole sus estatutos, en los que constaría la obligatoriedad de la enseñanza religiosa y la aceptación de la inspección del Ordinario que, por último, determinaría la forma en que su vigilancia habría de ejercerse.

Trataba el título IV "De los estudios superiores de religión" y en su introducción se refería el prelado al indiferentismo religioso de muchos católicos a causa de la extendida ignorancia religiosa, lo que llevaba a la superficialidad de sus creencias y la rutina de sus prácticas. No era posible difundir una sólida formación entre todos los fieles mas si cabía intentar la enseñanza "de algunos grupos selectos, futuros colaboradores del sacerdocio, elementos aprovechables para la Acción Católica, catequistas, profesores solidamente preparados" y, para ello, determinaba el Dr. COLOM la creación, como organismo de la jurisdicción eclesiástica, de un "Centro de Estudios Superiores de Religión" en Huesca, del que, con la organización que en su día determinara, dependerían los círculos de estudios de todas las asociaciones de la ciudad.

las escuelas de catequistas que se fundaran, los cursillos y conferencias sobre materias religiosas y sociales específicas y los cursos normales de religión a desarrollar por la nueva institución. Otros centros similares podían establecerse en otros puntos de la diócesis, previa aprobación del prelado.

El título V, por último, se refería a la "Organización" y por el suprimía el obispo la "Delegación Diocesana de catecismos" integrando sus funciones en la "Secretaría de Cámara y Gobierno", que sería asesorada por una Junta diocesana que él mismo, o el representante que designara, presidiría y cuya composición y funcionamiento determinaba.⁽²⁷⁶⁾

Seguían a esta ley diocesana las normas para su aplicación, dictadas, siguiendo el mandato del prelado, por la "Secretaría de Cámara y Gobierno"; normas que se desarrollaban en dieciocho artículos estructurados, a su vez, en tres capítulos, el primero de los cuales se refería al catecismo de los niños, que diseñaba minuciosamente división en secciones de "instrucción, estadística y propaganda", a la que, compuesta por "señoras o jóvenes de especial aptitud para los trabajos de propaganda", correspondía "buscar niños; actuar sobre los padres para que los manden y se interesen por su adelanto en la doctrina" y proporcionar premios y organizar "funciones solemnes que llamen la atención"; matrícula y fichero de alumnos; organi-

(276) 31 de agosto de 1933. "Ley diocesana sobre la enseñanza de la Doctrina Cristiana a todos los fieles, niños y adultos", SOE de Huesca, año 82, 1 de septiembre de 1933, núm. 9, págs. 156-169.

zación y contenido de las distintas clases y datos a remitir por los arciprestes); trataba el segundo capítulo de los centros de carácter privado, y en él se reiteraba la necesidad de autorización y envío de estatutos a la curia diocesana para su apertura;⁽²⁷⁷⁾ se establecía la obligación de los sacerdotes que desearan dedicarse a la enseñanza de solicitar permiso escrito del prelado así como la de hacer, al inicio de cada curso escolar, "la profesión de fe y juramento antimodernístico ante el Ordinario o su representante" y se señalaba el deber de todos los párrocos de enviar a la curia relación de las escuelas no oficiales que existieran en sus parroquias, señalando si sus directores estaban dispuestos a solicitar la autorización eclesiástica que la ley diocesana prevenía y a cumplir sus preceptos; el tercer capítulo se refería, por último, a la organización y en él se aludía a la obligatoriedad del establecimiento de la "Cofradía de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias y a la comunicación de las personas que colaboraban en la enseñanza del catecismo, se desarrollaba el sistema de funcionamiento de la Junta diocesana creada en la "ley" y se establecía la confección de estadísticas diocesanas y la creación de una asesoría para orientar a los párrocos en la realización del catecismo "y demás instituciones de la enseñanza religiosa".⁽²⁷⁸⁾

(277) No dejan de chocar los exigentes requisitos del prelado con la falta de compensación alguna, a diferencia de la línea seguida por el obispo de Barcelona o el arzobispo de Valencia en junio y julio de 1932.

(278) 1 de septiembre de 1933, *Ibid.*, pág. 170-174.

también motivado, sin duda, por el inicio del curso escolar, escribiría el Dr. ILUNDAIN una pastoral, en este caso muy breve, para reiterar a sus sacerdotes las instrucciones dictadas en marzo de 1932 sobre instrucción catequística y establecimiento de la "Asociación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias.

Confirmaba esta pastoral el hecho, puesto de manifiesto por la Sagrada Congregación del concilio en la carta transmitida por la nunciatura en el mes de julio, de que, pese al esfuerzo desplegado por la jerarquía para lograr una organización que contrarrestara el laicismo de la enseñanza oficial y de cuya eficacia querían dar cuenta los boletines diocesanos, la respuesta que recibían sus instrucciones no era todo lo positiva que cabría esperar. En las frases del cardenal hay un serio reproche hacia la actitud de sus párrocos.

Por ello, y movido quizá porque sus propias palabras no habían alcanzado el eco deseado, esperaba el arzobispo de Sevilla a estas fechas para hacer publicar, "muy deliberadamente", como decía, la mencionada carta de la congregación vaticana, a fin de que el clero diocesano conociera "las provechosas advertencias y encargos" que en ella se contenían.

Y hacía esto el cardenal porque señalaba que "más de una vez" había recordado tanto pública como privadamente a los párrocos la prescripción canónica sobre el establecimiento de la "Asociación de la Doctrina Cristiana" y, sin embargo, "algunos se han excusado alegando falta de personas para constituirlos" cosa que, pensaba, era muy

difícil que ocurriera y, aunque no negara tal posibilidad, no podía comprender como, según los datos recibidos, faltaba la asociación "en más de cien parroquias de la diócesis".

Esperaba que, ante los requerimientos de la Santa Sede, no habría "desidia" en este punto añadiendo que se estableciera o no dicha asociación, "sería inexcusable el párroco y encargado de cura de almas en cuyas parroquias no se organice la catequesis de niños en la forma y modo y tiempo que Nos hemos ordenado en Nuestros documentos dirigidos al clero en los dos años anteriores principalmente". Por ello insistía en la catequesis tanto en día festivos como en tres días laborables de la semana, pues la primera era insuficiente ante la constatación de que "va creciendo la mayor parte de los niños y niñas sin instruirlos en lo que más importa...", pues, junto a la ausencia de enseñanza religiosa en las escuelas, "para aumento de desdichas, no pocos padres no se preocupan de instruirlos, en casa, de estos conocimientos"; así, si no asumía esta tarea el párroco "¿qué será de la futura sociedad?, ¿qué de la religión, que de la moralidad?, ¿qué porvenir espera a nuestra amada patria?".

Por todo lo expuesto el arzobispo puntualizaba nuevamente las instrucciones ya dadas sobre el desarrollo de las catequesis e insistía en determinados extremos de la formación religiosa, tanto de adultos como de niños, al objeto de que, entre otros fines, "se precave el que caigan en el desastroso abandono que en la recepción de sacramentos hay en el pueblo aun en el tiempo pascual".

(279) Como hemos visto señalado en la memoria de la Junta diocesana para la enseñanza del catecismo, las parroquias de los pueblos de la diócesis ascendían a 238.

Concluía su escrito el Dr. ILUNDAÍN reiterando la necesidad de la instrucción religiosa "para sacar de la ignorancia, de la indiferencia y de la apatía que enerva los espíritus..."

Ya vimos como el obispo de Palencia, Dr. Agustín FARRADU GARCÍA, fue uno de los primeros miembros de la jerarquía que en 1931 tomó la pluma para referirse al tema de la enseñanza, y lo hizo no tanto para criticar las disposiciones entonces dictadas por el gobierno provisional, como para prevenir de la posible implantación de la escuela única, punto de partida y contenido esencial de su pastoral de 7 de junio, para, en base a él, acabar exhortando a los padres a que solicitasen la enseñanza religiosa en las escuelas oficiales y a los sacerdotes a que desplegaran todo su celo pastoral respecto a tal enseñanza.

Llegados los últimos meses de 1933, seguiría el pensamiento del prelado fijado en las mismas coordenadas que informaban aquella pastoral y, así, el 29 de octubre, suscribiría otra, muy extensa, en la que, para acabar dictando, como el obispo de Huesca, un "mandamiento episco-

(280) 1 de octubre de 1933, "Alocución pastoral". BOE de Sevilla, año 76, 5 de octubre de 1933, núm. 1231, págs. 243-245. Como se ve y, aparte de las reconvenciones al clero, los documentos del cardenal ILUNDAÍN siguen constatando, a diferencia, por ejemplo, de los del Dr. EIJU y GARAY, la actuación negativa de los padres de familia y el extendido indiferentismo en su diócesis del que ya hemos tratado al aludir a la pastoral de 21 de febrero de 1932 (ver la nota 131). En la referencia allí citada destaca CUENCA TORIBIO la escasez de sacerdotes en la sede isidoriana que "colocaba a la archidiócesis en el furgón de cola de la densidad sacerdotal española", señalando, por ello, la "insuficiencia estructural de los mandos eclesásticos para ejercer la labor que pastoral y lógicamente -aunque no siempre en la práctica- había atribuírles". Esta debía ser una de las causas de la falta de respuesta a las instrucciones impartidas.

pal" con una minuciosa regulación de la enseñanza confesional en la diócesis, haría, nuevamente, un prolijo análisis de lo que, a su juicio, eran las características esenciales de la escuela única e insistiría, como entonces -aunque ahora basándose en las determinaciones constitucionales- en su posible implantación en España; medio claro de alarmar a clero y fieles para estimularles a actuar según el "mandamiento episcopal" que dictaba y, sobre todo, para encaminarles hacia una concreta intención de voto.

No otra cosa que el deseo de provocar esta alarma -de la que, a juzgar por la reiteración de sus pensamientos, el debía ser el primer partícipe- cabe deducir de esta pastoral con la que cerramos el período examinado: la descripción de los que presenta como objetivos de los teóricos de la escuela única y su sucesivo enlace con los preceptos constitucionales, pretendiendo demostrar que estos podían conducir a aquellos en su desarrollo por las futuras Cortes. No podían tener otra pretensión sus palabras, máxime cuando no efectuaba en absoluto una exposición rigurosa de la ley fundamental sino que, antes al contrario, llegaba incluso a falsear -quizá por ignorancia de toda la regulación constitucional- sus determinaciones en un momento electoral crítico en el que no dejaba de resaltar intencionadamente la potestad del futuro legislador y la actitud de los católicos ante el requerimiento de voto.

Comenzaba el Dr. PARRADO lamentando "lo poco que eficazmente se ha hecho por parte de los padres de familia" para cambiar la dirección dada a la escuela pública desde el advenimiento del nuevo régimen, a pesar de "ser tanto lo que se ha escrito y hablado acerca de esto", no habiéndose percatado aún del atropello que contra sus derechos se cometía por el Estado.

Y ello a pesar de que la Iglesia había propagado y divulgado reiteradamente la preeminencia paterna en la educación de los hijos, cuya indiferencia y apatía solo era explicable porque desconocían el alcance del sistema escolar que se quería implantar en España, sistema que culminaría en la escuela única.

Quería el obispo hacer ver, una vez más, a sus diocesanos, quizá motivado por la próxima prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas, lo que tal clase de escuela significaba. Con ella, decía, "lo que en puridad se pretende, es aplicar el "socialismo"²⁸¹ en su grado máximo a la enseñanza y educación nacionales, suponiendo absurdamente que los hijos no son de sus padres, sino del Estado", frase que, introduciendo por primera vez el concepto de "socialismo" -al que duramente criticaba-, reiteraba, culminando las palabras de la jerarquía en el periodo, el constante "leit motiv" de muchos escritos pastorales: expropiación de la educación de los menores por el poder civil. Ante ello el prelado deseaba que los padres de familia conocieran la situación y supieran defender "su libertad personal y su conciencia cristiana", por lo que pasaría a explicarles: a) que era la escuela única, b) como caminaba ya hacia ella la escuela nacional, c) cuales eran los deberes de los padres y, d) "el asalto a sus bolsillos de que se les hace víctima".

Cifándose a la descripción de la escuela única diría el Dr. PARRADO, como ya hiciera en 1931, que esta encerraba, sin duda, aspectos positivos cuales eran facilitar a todos la instrucción y aprovechar los mejores talentos; lo malo,

281) En bastardilla en el original.

añadiria, es que ello se pretendia realizar "dentro de un sistema de escuela antinatural y tiranica, religiosa, moral, social y economicamente desastroso", lo que solo podria hacerse "en un regimen social y politico de absurda comunidad de bienes y personas, cual lo propugna el socialismo, aplicado en toda su repugnante integridad. Es decir, *socializando los hijos*"', como se quiere socializar, dentro del socialismo, todo". Las diversas defensas de la escuela unica no encubrian, para el prelado, mas que "el comunismo docente y educador, violento, antinatural y absurdo, impuesto por las logias masonicas para arrancar de las almas, si posible fuera, hasta la raiz de todo sentimiento religioso".

Todo ello nacia del "supuesto principio" de que el hombre se ordenaba "a la sociedad politica, al dios-Estado", como si los seres humanos fueran para el Estado y no a la inversa, lo que desembocaba en el antiguo Estado espartano o en el moderno Estado sovietico "que proclama ser el niño propiedad exclusiva"' suya", postulados que iban en contra de las relaciones naturales entre padres e hijos establecidos por Dios.

Dos, diria el prelado, eran los polos que informaban la escuela unica, introduciendo unos razonamientos que parecen a todas luces superfluos desde el punto de vista de la defensa de la ensenanza catolica y, cuya finalidad, ya lo hemos indicado, no creemos pudiera ser otra que crear la alarma en los fieles o transmitirles la suya propia: la gratuidad y la seleccion. Calificaria al primero con el que

se pretendia introducir la democrática igualdad en "toda la enseñanza" de forma que, por no humillar a los pobres, ni ricos ni pobres pagasen- de "señuelo... para cazar ignorantes e incautos con los abalorios de una absurda utopia...", al ser los hombres iguales en cuanto tales pero distintos en sus características. Y, además, habia dos factores que la harian imposible pues, por una parte, no se podian allegar las cantidades necesarias para montar la "gigantesta maquinaria para dar enseñanza gratuita a los millones de niños y adolescentes que se hallan en periodo de estudios" (porque, a juicio del prelado, que queria aqui exagerar sus argumentos llegando a hipotesis extremas e imposibles, seria menester "darles clase y alojarlos, separados de sus familias, en edificios a proposito, y alimentarios, vestirlos, cuidarlos, enseñarlos, recrearlos"), estas cantidades, en todo caso, habrian de aportarlas los contribuyentes o, "puesto en planta el comunismo", la Hacienda del Estado, pero un país no podria soportar semejante gasto.

El otro factor (y aqui el Dr. FARRADO no solo emplearia argumentos que, cuando menos, pueden calificarse de exagerados sino carentes de todo rigor y ajenos a la evolucion social, en una clara defensa de los sistemas de castas o estamentos sociales que casi entronca con conceptos medievales de la vida, ignorantes de toda realizacion personal), el otro factor, diria, era que "la enseñanza universal gratuita dara pie a dos vicios antisociales: la empleomania y el abandono de la vida rural".

"Porque las carreras se alzarán en pocos años con la flor de la juventud campesina y artesana, con el consiguiente desprecio del campo y disgusto de los oficios manuales, disgusto y desprecio acompañados del amor a la ciudad y afición a los empleos públicos, de donde vendrán esas calamidades públicas que, si ya hoy son de lamentar, calcúlese el estrago que causarían el día que lanzase en medio de la sociedad sus productos esa fábrica universal de bachilleres y licenciados, eternos candidatos a los empleos públicos."

Para resolver estas dificultades se utilizaría la "selección",²⁸³ pero ¿con qué justicia se podría hacer esta? Lo único que se conseguiría sería "poner en contradicción la Escuela Unica con el principio de nivelación universal". Y, así, añadiría el Dr. PARRADO, volviendo al extremismo en sus planteamientos:

"¿Cuántos y quiénes habrán de verificar las delicadas selecciones de los cientos de miles de niños y adolescentes que, comprendidos entre los seis y los veintiseis años, tendrían derecho a seguir una carrera? ¿Con qué criterio y cuáles normas y garantías de acierto las harán? Supongamos que los seleccionadores fueren solo veinte mil. ¿Será posible que todos tengan el mismo criterio de justicia y que se despojen de sus pasiones, afectos, prejuicios, ideario y concepto de los valores de la vida, en la impropia tarea de hacer en justicia el recuento y selección de todos los jóvenes de un país para dedicar a cada uno a la ocupación que según sus aptitudes pueda dar el máximo rendimiento social? Eso es un puro sueño!."

(283) En bastardilla en el original.

Todo ello implicaría, además, frente a esas barreras que se querían derribar en pro de la nivelación social, el levantar la mas ignominiosa de ellas: la que separaría a "los listos y los zoquetes" lo que, en definitiva sería despedir a la "diosa democracia" de la escuela única.

Por todas estas consideraciones concluiría el obispo indicando que "las maravillas de la escuela única son una burda fantasía propia de soñadores de oficio o de quienes no se toman la molestia de pensar".

Dicho esto, pasaría a analizar el laicismo que, señalaba, esa la cuestión que dominaba a todas las demás y que, no siendo en modo alguno esencial a la escuela única, figuraba siempre, sin embargo, en los programas de sus defensores y, de ahí, que aquella fuera sinónimo de "escuela laica, neutra, atea, sin Dios" lo cual "es un absurdo moral, jurídico, científico y pedagógico, y la mas grave ofensa que se puede hacer a la libertad humana y a la civilización", por cuanto que "sin la idea de Dios, no queda otro fundamento en que apoyar el orden social, que la fuerza bruta. Y por lo mismo, las ideas anárquicas son lógica consecuencia de la escuela sin Dios"; escuela que vulneraba los derechos del niño, so capa de respetar su conciencia, al negarle el necesario alimento para su espíritu y, por ende, su correcta educación. Porque no se podía pretender que la enseñanza religiosa hubiera de relegarse al seno de la familia o encomendarse solo a los sacerdotes: "si a juicio de los padres la religión es lo mas natural, profundo y necesario en la vida, es deber suyo ineludible no tolerar que el maestro en la escuela, el catedrático en el Instituto o la Universidad asesinen espiritualmente a su hijo" y no entrar en el examen de este hecho aludiendo a la defendida neutralidad no era mas que una "hipocresía".

Aquí acabaría el análisis que sobre la escuela única haría el Dr. PARRADO antes de proceder a la descripción de su implantación en España, si bien, para redondear sus frases, las remataría con un párrafo en el que daba a entender que podría aun extenderse mucho más en sus consideraciones si incorporase a ellas otros matices que solían acompañar a la escuela única y entre los cuales - aunque quede en el aire- parecía aludir, como colmo de los males, a la coeducación, según la interpretación que a la connotación de "mixta" hemos visto ya dada por el Dr. MUNIZ.

"¿Cuanto no podríamos decir si entrásemos en el aspecto moral y social de la Escuela única, gratuita, obligatoria, laica y mixta! Pero es hora ya de que pasemos a ver si es ella el troquel en que se quieren moldear las futuras generaciones españolas."

Las tendencias escolares "unicistas"²⁸⁴ españolas vendrían de muy atrás, inspiradas en "el criterio monopolizador estatal de la Revolución francesa" y que en los últimos años se agudizaron hasta cristalizar con el nuevo régimen en concretas disposiciones del ministerio de Instrucción Pública y de la Constitución, que habían puesto los pilares "para una escuela nacional de tipo "soviético"²⁸⁵

(284) En bastardilla en el original.

"¡Escuela única! ¡Hay que implantar la Escuela única! He aquí el grito que hace tres años próximamente empezó a lanzarse a los cuatro vientos por la Prensa socialista y, con más o menos descaro, por toda la demás titulada de izquierdas. Desde entonces ese mismo es el grito de guerra de la Asociación General de Maestros, domiciliada en la Casa del Pueblo, de Madrid, y también en la Confederación Nacional de Maestros y otras asociaciones del Magisterio nacional.

«A fines del año 1930 se proclamó igualmente la Escuela única en conferencias organizadas en el Ateneo de Madrid por la Sección de Pedagogía, y allí se expuso con toda crudeza por el presidente de la Asociación General de Maestros y, meses después, Director general de primera enseñanza, el tipo de escuela de los Soviets, como un gran acierto²⁸⁵ de Rusia en materia pedagógica.

«Al finalizar el mes de Enero de 1931 se celebró en Madrid una Asamblea de Inspectores de Primera Enseñanza, y en ella pudo verse que había Inspectores totalmente envenenados con las teorías estatales de la Escuela única; de marcado sabor comunista.

«En otras asambleas y congresos pedagógicos celebrados por aquellas mismas calendas, como la de Licenciados y Doctores, Catedráticos de Instituto, también se dejó oír la voz de fervientes patrocinadores de la Escuela única. y la Federación Universitaria Escolar, o sea, la F.U.E., incluyó en su programa la Escuela única y se quitó la careta de la neutralidad, en la que nadie creía, dejando al descubierto su verdadera faz, no arreligiosa sino *antirreligiosa*.²⁸⁶»

(285) En bastardilla en el original.

No todas las instancias del magisterio propugnaban la línea que el obispo denunciaba, como lo demuestra la noticia aparecida en "El Sol" en diciembre de 1932 y la cual revela, por otra parte, el laicismo a ultranza de ciertas autoridades, que, en una draconiana interpretación de la legalidad vigente, parecían olvidar las libertades proclamadas por la Constitución:

"El carácter religioso de una Asociación. Paepsona, 22. La Asociación de Antiguos Alumnos de la Normal acaba de manifestar en un acto reciente su carácter religioso y confesional. El director de la Normal, invocando

Todo ello culminaría en los conocidos decretos de 1931 y, por último, en preceptos constitucionales que iba a recordar ahora a los padres de familia, de los que, decía "en ellos ni siquiera se hace mención", expresión del prelado que, a tenor de lo que ya hemos indicado al referirnos a la cuestión de la enseñanza en la Constitución, es necesario puntualizar ya que, si bien es cierto que los artículos 48 y 49 de la Norma fundamental no aludían a los padres, el artículo 43, integrado en el mismo capítulo que aquellos, establecía -como ya hemos expuesto- la obligación de los padres de "educar e instruir a sus hijos", obligación por cuyo cumplimiento el Estado velaría, obligándose, a su vez, "subsidiariamente". El Dr. PARRADO, bien por ignorancia, bien deliberadamente, obviaría analizar la responsabilidad primaria que en la educación de la prole reconocía a los padres la Constitución y, de ahí, que aludiera a un modelo de enseñanza totalmente estatalizada y que ésta, además, le pareciera constitucionalmente posible.

disposiciones legales vigentes, ha comunicado a la aludida Asociación la orden de abandonar, en el plazo de ocho días, los locales utilizados en la Escuela Normal de Magisterio". ("El Sol", 23 de diciembre de 1932).

Frente a tal noticia también había publicado el periódico el 17 de agosto de 1933 la que daba cuenta de la asamblea nacional de maestros celebrada en Santander y en la que se habían adoptado varios acuerdos "en orden a la defensa de la escuela nacional". Sobre la actitud socio-política de los "maestros de escuela", señala BRENNAN que un ochenta por ciento de ellos simpatizaba con la clase media baja de las ciudades, "wedillo de los partidos republicanos" y "fuertemente anticlerical" (BRENNAN, Gerald, *El laberinto español*, 1960, pag. 176).

Pasaba, así, a preguntarse el Dr. PARRADO si la Constitución imponía "la Escuela única, de ideología socialista, *monopolizada*" por el Estado y aplicada a toda la enseñanza y educación", para concluir que "expresamente y de momento no", pero añadiendo seguidamente que "de hecho, en la ley fundamental se ha colocado el *punto de plata*" para llegar a la Escuela única", "puente de plata" que el obispo deducía de la regulación contenida en el artículo 40, al señalar que el servicio de la cultura era atribución "esencial" del Estado y que este lo prestaría por la escuela unificada que, para él era exactamente la escuela única. Ante ello se preguntaba si el Estado prestaría tal servicio respetando el derecho de los padres, o por encima, y aún en contra, de su voluntad, señalando que eso no se sabía "aunque si sabemos que de los padres no se habla, como antes hemos dicho", para concluir que la interpretación del precepto hacía el monopolio del Estado o no dependería, en suma, del legislador que lo desarrollara.

Pero aún había más, puesto que el artículo 49 dejaba a una ley de Instrucción Pública el determinar las condiciones en que se "podrá autorizar" la enseñanza en establecimientos privados, regulación de la que el obispo extraía dos negativas hipótesis: la ley podría "no autorizar" la enseñanza privada o podría autorizarla con unas condiciones imposibles de cumplir, por cuanto el artículo 49 daba una facultad de carácter potestativo al Estado, no nombrando el "monopolio" pero reservándole la facultad de establecerlo.

Estas alarmistas conclusiones las fundamentaría el prelado en declaraciones de Rodolfo LLOPIS, señalando que para cumplir el ideal por el expuesto en defensa del comu-

nismo, se estaban cerrando las escuelas religiosas donde se instruían gratuitamente hijos de las clases populares "por cientos de millares" mientras se pedían cientos de millones para abrir otras que avanzaran hacia el comunismo, según las posibilidades contenidas en la Constitución, todo lo cual no era más que "un cínico asalto a los bolsillos y un bárbaro atropello a la libertad y a las conciencias".

Pero así como se había detenido en explicar prolijamente los peligros de la escuela única y había razonado el por qué de sus probabilidades de implantación en España, extrapolando exageradamente -no sabemos si porque el mismo así sinceramente lo entendía, cegado a toda evidencia que no fuera la defensa a ultranza de la escuela libre o porque deliberadamente quería distorsionar los hechos para producir mayor impacto en los riele- las "utopías" que había descrito a la realidad de los preceptos constitucionales que, si bien expresaban, por una parte, en términos de posibilidad la autorización de la enseñanza privada, tal posibilidad era, al tiempo, un compromiso constitucional y, por otra, referían la gratuidad tan solo a la enseñanza primaria, cosa que el prelado callaba, como si la descripción que había hecho de este extremo, referido a todos los grados de enseñanza, fuera perfectamente aplicable al contenido de la Norma suprema; de igual manera pasaría a renglón seguido a indicar los caminos para que los católicos impidieran la realización de los objetivos que tan pormenorizada y patentemente había descrito, para lo cual, y como destinatarios principales de sus palabras, se dirigiría especialmente a los padres de familia, a los cuales hablaría de sus deberes "frente a los horizontes de la escuela socialista perillada en la nueva Constitución" y frente al laicismo establecido en las escuelas oficiales y agravado con la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas.

El primer deber apuntaría a la escuela católica, institución por la que el prelado clamaría con más fuerza que ninguno de sus hermanos ya que, apoyándose en la exhortación a colaborar en las reivindicaciones escolares a que aludía la declaración colectiva de 20 de diciembre de 1931 y proclamando que la primera de ellas era la libertad de enseñanza, no solo insistiría -como venia haciendo el resto del episcopado- sobre la necesidad de que los católicos sufragasen sus propias escuelas sino que les instaría a que las exigieran del Estado:

"Y como es cuestión de conciencia,⁽²⁸⁷⁾ en esto no podemos transigir, sino que *debemos*⁽²⁸⁷⁾ luchar contra el *monopolio*⁽²⁸⁷⁾ y la coacción en la enseñanza: luchar sin descanso. Venimos, pues, obligados a pedir y exigir que se nos dé *escuela libre*."⁽²⁸⁷⁾

Y ello porque la imposición estatal de la escuela laica era "una coacción y tiranía" para un pueblo que en su mayoría era creyente y que, por tanto, no debía consentir tal proceder so pretexto de que podía haber algún ateo o librepensador, "la misma Constitución proclama la libertad de conciencia", argumentaría el prelado, esgrimiendo un principio constitucional al que la jerarquía era, precisamente, contraria y, si la proclamaba, no podía pretenderse la coacción de la escuela laica. "Dense a los disidentes, donde los haya, sus escuelas" añadiría, contradiciendo el principio, tantas veces defendido, de que la escuela estatal había de ser por fuerza confesional, para limitarse a pedir tales escuelas para los católicos, insistiendo, para ello, en el tema del reparto proporcional, toda vez que si el presupuesto de instrucción pública era pagado por todos, justo era que se repartiera entre la escuela oficial y la privada.

(287) En bastardilla en el original.

"Porque es injusticia manifiesta -se ve con tener solo sentido comun, aunque no quieren verlo, ni las Logias ni los politicos por ellas manejados- que pagando todos los padres de familia las contribuciones de las que se toma todo lo destinado a la enseñanza, se obligue a los padres catolicos a pagar otra vez la escuela y el maestro que prefieren para sus hijos -lo que es obligarles a pagar la enseñanza dos veces- a no ser que quieran sacrificar su conciencia aceptando la escuela y el maestro laicos."

Pero el hilo de este razonamiento iba a hacer caer al prelado en claras contradicciones con cuanto anteriormente habia querido demostrar respecto a la inviabilidad de la gratuidad de la enseñanza que, como hemos visto, y para demoler las bases de cualquier posible proyecto de escuela unica, habia pretendido fundamentar por el sistema de señalar que esta se pretendía, en última instancia, para todos los grados de enseñanza y que implicaría la tutela directa de niños y adolescentes por parte del Estado. El obispo olvidaria en esta parte todas estas cuestiones cuya consecucion habia calificado acertadamente de imposibles, y basándose en que los carentes de fortuna no podrian escoger entre la gratuita escuela oficial y la onerosa privada concesional, afirmaria ahoraque la libertad de enseñanza exigia que la escuela privada fuera tambien gratuita"" sin entrar aqui a considerar, como antes habia hecho, hasta que grado de enseñanza incluía en el término "escuela".

Por ello volveria a apoyarse en las frases del documento colectivo de 20 de diciembre de 1931 relativas a la "reparticion proporcional escolar", única forma de garantizar los derechos de la familia contra el monopolio estatal de la educación y, dando un paso más, dado el

(288) En bastardilla en el original.

periodo electoral, pediria que esta reivindicacion se solicitase de cuantos recabaran el voto de los fieles.

Mientras todo esto no se lograra, los católicos habrian de imponerse los necesarios sacrificios para "multiplicar las escuelas y centros privados de ensenanza e intensificar en ellos la cristiana educacion de la ninez y la juventud" al amparo -tal como no podia menos de reconocer, a pesar de cuanto habia expresado sobre las determinaciones constitucionales y del lógico calificativo que introducía- "de la menguada libertad que para crearlos y sostenerlos nos han dejado la Constitucion y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas" y, por eso, pediria a sus diocesanos que favorecieran a "las escuelas y colegios que, utilizando la legalidad vigente, han abierto animosos seglares en esta ciudad, para proseguir, en lo posible, la labor docente y educativa de los Religiosos de uno y otro sexo", sobre todo en beneficio de las clases mas humildes, y que se preocuparan de la ensenanza religiosa de sus hijos, tanto en la ninez como en la adolescencia; para todo lo cual recomendaba especialmente la organizacion de la "Asociación de padres catolicos de familia" en todos los pueblos.

Tras esta exhortación pastoral pasaba el prelado a fijar la organizacion de la ensenanza catolica en la diocesis estableciendo unas "escuelas parroquiales de Religion" para la ensenanza exclusiva de esta a los niños que asistieran a las escuelas oficiales y que impartieran sus ensenanzas con la continuidad que ya hemos visto establecida en otras diocesis, y cuya direccion, funcionamiento, etc. determinaba, así: como todo lo relativo a catequistas seglares, "Catequistas de la doctrina cristiana", censo de

escolaridad, administración de la primera comunión (que los parrocos no podrian hacer sin promesa de los padres respecto a la continuidad de la formación religiosa de sus hijos tras ella); licencia previa episcopal para la calificación de un centro escolar como católico, sujeción de estos a las normas diocesanas y control; creación de un Centro de Estudios superiores de Religión a similitud del creado por el obispo de Huesca; catecismo de adultos; instituciones para la juventud; establecimiento de la "Asociación de padres de familia"; creación de un "Consejo de Instrucción Religiosa" "para uniformar prácticamente en lo posible y estimular en todo caso e inspeccionar la instrucción religiosa en la Diócesis", de un "Secretariado catequístico" con competencias sobre estadística de las catequesis y asesoría a los directores de estas y, por último, de un "museo catequístico" con labores de orientación, por medio de una exposición permanente, biblioteca y "aprovisionamiento de material pedagógico".

El "mandamiento episcopal" era cerrado, por último, con el establecimiento de una colecta mensual pro instrucción religiosa.⁽²⁸⁹⁾ y ⁽²⁹⁰⁾

(289) 29 de octubre de 1933, "Carta pastoral. El rumbo de la escuela pública y nuestros deberes", BQE de Palencia, año 83, 1 de noviembre de 1933, núm. 21, págs. 585-619. Las alarmistas y exageradas argumentaciones contenidas en esta pastoral la convierten en un documento singular que consideramos hemos de incluir en el apéndice (ver el núm. 25).

(290) Queremos precisar, para ultimar este epígrafe, que el periódico "El Sol" había publicado el 15 de octubre un tuelto bajo el título "Una pastoral del arzobispo de Toledo sobre la situación de la enseñanza religiosa" que nos parece responder al deseo del periódico de dar noticia de las actuaciones del nuevo priado que a la realidad, ya que dicho documento, lejos de tener un contenido que respondiera a tal título, era una "Carta de saludo al venerable clero diocesano", mediante la que el Dr. SOMA anunciaba simplemente la visita a los diecisiete arciprestazgos de la archidiócesis para informarse de la situación económica y de las necesidades de la enseñanza religiosa, entre otros extremos. (BOE de Toledo, año 89, 1 de septiembre de 1933, núm. 12, págs. 245-250.

19. La conferencia de metropolitanos de octubre de 1933

Señaladas las líneas maestras de actuación en la cuestión de la enseñanza religiosa en la conferencia celebrada el año anterior y desarrolladas las normas de actuación de los fieles por el documento colectivo del mes de mayo, no contuvieron en esta ocasión las propuestas de las distintas provincias eclesiásticas sobre los puntos a tratar por la conferencia -y a diferencia de lo que había sucedido en 1932- una postura homogénea acerca de considerar el tema de la enseñanza como uno de los centrales a examinar, máxime cuando la actuación de la Iglesia venía a ser requerida ahora por otros problemas, entre ellos, el relevante de la cuestión económica.⁽²⁹⁾ Así, solo las provincias eclesiásticas de Granada y de Valladolid insistieron en que este punto fuera tratado por los metropolitanos.

No obstante, el cardenal VIDAL lo incluyó como uno de los que debían debatirse -y efectuar las oportunas propuestas- por las distintas conferencias episcopales que, reunidas en el mes de octubre, habrían de remitir el resultado de sus deliberaciones como base preparatoria de la conferencia. La formulación exacta del mismo se apoyaba exclusivamente en dos cuestiones: "Medios de intensificar la actuación y difusión de la Asociación de la Doctrina Cristiana, secundando los deseos de la Sda. Cong. del Concilio manifestadas en la última Carta-Circular del Emmo. Prefecto de la misma" y "¿Conviene recordar la prohibición

(29) Ver el apéndice sobre el presupuesto del culto y clero.

que los canones imponen a los padres y tutores de mandar a su hijos a escuelas o centros laicos, neutros y anticatólicos, de la cual se hizo merito en el último documento colectivo? Normas practicas a los fieles respecto al particular", cuestión, esta última, que sin duda traía su causa de las iniciativas tomadas por algunos prelados y la necesidad de hacer un planteamiento homogéneo.

Las propuestas realizadas por todo el episcopado eran coincidentes en la necesidad de establecer en todas las parroquias la "Asociación de la Doctrina Cristiana" proponiendo a tales efectos diversos medios (destaca aquí la propuesta de la provincia hispalense respecto a que para esta obra se interesase especialmente a la "juventud femenina de la Acción Católica" y la de la toletana señalando que, aparte de la erección de la asociación debería insistirse con los padres para que ellos comenzaran la formación cristiana de sus hijos "singularmente con las madres"), mas sin embargo, discrepaban en el segundo punto, señalando unos que no era preciso insistir en dichas normas, proponiendo otros lo contrario y apuntando otros, por último, que ello era de la competencia de cada ordinario.⁽²⁹²⁾

En esta ocasión los metropolitanos no se limitaron a deliberar a partir de las sugerencias aportadas por las distintas provincias eclesíasticas; ahora se pronunciaron también sobre el documento que Angel HERRERA había remitido al arzobispo de Tarragona en 11 de octubre y por el

(292) *Esglesia i Estat durant la segona...* IV, págs. 86 a 128.

que la Junta Central de Acción Católica daba a conocer a los metropolitanos lo realizado desde su constitución en el mes de febrero y pedía su autorización para continuar en el desarrollo de sus funciones, haciendo concretas propuestas a estos efectos.

En relación con el tema que tratamos figuraban dos cuestiones en el citado informe: una, relativa a la conveniencia de no redactar el reglamento que había de regir la rama de "Hombres Católicos", a fin de que la constitución de nuevas organizaciones "no estorben el desarrollo de las Asociaciones de Padres de Familia, que las circunstancias presentes aconsejan difundir y ayudar" y otra referente a la creación de instituciones de cultura superior religiosa y en la que destacan la alusión al primer curso celebrado en la Universidad de verano de Santander y el deseo de fundar una Universidad Católica permanente.⁽²⁵³⁾

En base a todos los extremos apuntados la deliberaciones de los metropolitanos dieron lugar a los siguientes acuerdos:

1. Se constató la coincidencia de las conclusiones de las últimas conferencias de metropolitanos sobre intensificación y difusión de la organización de la enseñanza del catecismo con la carta-circular de la Congregación del Concilio que

(253) Ya hemos visto que este deseo era compartido por la "Federación de Amigos de la Enseñanza" y que no llegó a realizarse. Ver la nota 215.

había de procurarse cumplimentar en todas las diócesis procediendo a agrupar todos los medios de apostolado, especialmente de la juventud, en torno de la "asociación de la doctrina cristiana" a fin de que en ninguna parroquia faltaran catequistas y dándole una amplia difusión aprovechando los medios y locales de la Acción Católica y estructurando su funcionamiento por medio de los oportunos reglamentos; igualmente deberían organizarse semanas catequísticas y nombrarse visitantes diocesanos que inspeccionaran las catequesis.

2. Se convino la necesidad de atenerse estrictamente a las normas dadas en el último documento colectivo sobre asistencia de los niños católicos a las distintas escuelas, normas de las que, a juicio de los metropolitanos, surgía "una actuación precisa, coherente y eficaz para evitar la asistencia improcedente y temeraria a la escuela laica ...", así como para no dar ocasión a un movimiento equívoco que permitiera atacar a los católicos como enemigos sistemáticos de la escuela oficial, con el consiguiente riesgo de ofender a los maestros nacionales de espíritu católico, que pueden todavía impedir que muchas escuelas oficiales sean positivamente laicas". Los metropolitanos, no obstante, procedieron ahora a suavizar un tanto los términos del documento colectivo de 25 de mayo, por cuanto, por una parte, si bien reiteraban seguidamente que debía "urgirse severamente" la asistencia a la escuela católica donde la hubiera, ello era siempre que tal asistencia no ofreciera "ningún obstáculo razonable" y, por otra, al determinar que los Ordinarios deberían actuar de acuerdo con las normas fijadas y dictar las correspondientes "cautelae" a seguir en

los casos en que solo existiera escuela neutra o laica, señalaban que no debía olvidarse la necesidad de la buena organizacion de la catequesis "en forma eficaz para suplir la enseñanza religiosa de la escuela única"²⁹⁴ a que puedan concurrir los hijos de católicos so pena de quedar faltos de toda formación escolar", con lo que venia a recomendarse una actitud general de tolerancia -en forma contraria a la estricta formulación del documento colectivo- respecto a la asistencia a las escuelas laicas para salvar la debida formación escolar de los niños, (los metropolitanos no lo indicaban dadas las competencias de cada Ordinario en este punto, pero es obvio que tal tolerancia tenia sus límites -como hemos visto expresado por los obispos que ya habían procedido a desarrollar este punto de la pastoral colectiva- cuando se tratara de escuelas cuyos maestros pudieran impartir ideas claramente contrarias a la religión). Los metropolitanos exhortaban, por último, la multiplicación de escuelas católicas y la reducción de la influencia de las escuelas laicas "por todos los medios"; frase genérica cuyo desarrollo parecían dejar a la iniciativa de cada obispo.

3. Entrando en el análisis de las propuestas efectuadas por la Junta Central de Acción Católica y tomando como punto de partida lo acordado en la conferencia de 1932 respecto al establecimiento de cursos de enseñanza superior de religión, la conferencia constató la intensificación de los trabajos desarrollados "para crear instituciones de cultura con vistas a la creación de Universidades Católicas para hombres

(294) Este calificativo es utilizado como forma de definir, no muy acertadamente por cuanto llevamos dicho, la escuela oficial.

y mujeres separadamente", siendo sus resultados la creación del Instituto Pedagógico de la FAE y el Instituto de Cultura Superior Femenina, "295" conviniendo la constitución de Comisiones para el estudio detallado del proyecto de creación de una Universidad "296" y valorando la realización de cursos de verano en la Universidad santanderina. "297"

20. Las reseñas de las actuaciones.

Tal como hemos hecho en relación con el año 1932 queremos recoger ahora las reseñas específicas que, con independencia de las múltiples alusiones a las manifestaciones religiosas de toda índole, fueron publicando los distintos boletines diocesanos a lo largo de 1933 sobre la concreta cuestión de la enseñanza y las actuaciones relacionadas con ella que, a lo largo de estos últimos meses del primer bienio, complementamos con noticias de prensa reveladoras de la actitud mantenida en algunos casos por las autoridades locales respecto a las actividades desplegadas, de acuerdo con las exhortaciones y organización diseñadas por la jerarquía eclesiástica y de la que ya hemos citado anteriormente algún ejemplo. "298"

(295) Ver en el epígrafe siguiente la alusión a este Instituto.

(296) Ver la nota 215.

(297) *Església i Estat durant la segona...*, IV, págs. 72-73 y 77-79.

(298) Ver la nota 180.

Comenzamos nuestra referencia con la publicación en el boletín eclesiástico de la diócesis de Barcelona de la convocatoria, para la última semana de febrero, de unas "Jornadas de Estudio en torno a la Escuela Católica", organizadas por el "Comité Diocesano de la Escuela Católica" bajo los auspicios del obispo y en las que se pretendía tratar el tema abordando la problemática que, en todos los ordenes, tenía planteada la escuela en España. De esta forma los puntos a tratar, según el programa, se referirían a aspectos jurídicos, políticos, económicos y organizativos, todo ello desde el punto de vista de la enseñanza confesional ("la legislación escolar en el extranjero y en España"; "los padres de familia y la escuela"; "organización económica y financiera de la escuela católica"; "las escuelas parroquiales"; "las escuelas particulares"; "el catecismo y la escuela"; "formación del magisterio católico"; "la escuela única: sus defectos e imposibilidad de implantarla"; "el ejemplo de los católicos de otras naciones en relación con la escuela" y "la libertad de enseñanza").⁽²⁹⁹⁾

También a una futura realización se referiría la noticia publicada por el boletín de Palencia, aludiendo al cursillo de "Cultura Religiosa Superior" que, organizado por la "Federación de Amigos de Enseñanza", tendría lugar en Madrid en fechas que no especificaba, señalando que esta iniciativa había despertado en otras provincias el deseo de hacer algo semejante, pues, apostillaba el redactor -siguiendo la línea crítica a la situación del catolicis-

(299) s.f., "Comité Diocesano de la Escuela Católica". BOE de Barcelona, año 76, 31 de enero de 1933, núm. 2, págs. 19-20.

mo español, a la que la Iglesia no era, en todo caso ajena y que, sin análisis riguroso alguno, achacaba al desconocimiento de la religión los derroteros seguido por la política- "a nadie se le oculta que la causa de muchos de los males que padecemos está en la supina ignorancia religiosa, no ya de las clases bajas de la sociedad, sino aun de aquellas que se tienen por cultas, y que tal vez en otras materias lo son."²⁹⁹

Al relatar la "Fiesta misional de la Santa Infancia en Tarazona", celebrada con una comunión general de los niños y las niñas de colegios religiosos y de las catequesis, destacó el cronista las palabras que les dirigiera el Dr. GOMA que, indudablemente, quería impresionarlos con exageradas narraciones para hacer una crítica a la política que se seguía en materia de enseñanza que sus mentalidades pudieran entender y rechazar, y, así, les habló de que los niños eran asesinados en los países infieles, siendo muy distinta la realidad donde existía religión cristiana, llegando, con ello a la conclusión de que "si los niños tan considerados en nuestro país y en todo el mundo civilizado deben tantos beneficios a la religión cristiana, no se concibe aberración mayor que el querer prohibirseles la enseñanza de esta religión". La reseña de este acto concluía con unas palabras en que el cronista se quejaba de que la colecta de la obra había disminuido ese año "considerablemente" con relación a los años anteriores, por lo que exhortaba a los parrocos para que no dejaran perecer esa asociación en los pueblos. ³⁰⁰

(299) s.f., "Crónica General. Labor cultural", BOE de Palencia, 1 de febrero de 1933, núm. 3, págs. 73-76. Estos cursillos se inscribían sin duda en el diseño de la enseñanza religiosa efectuada por el Dr. EIJO y GARAY, que, según hemos visto, prestó especial atención al tema de la formación de jóvenes y adultos.

(300) 2 de febrero de 1933, "Fiesta misional de la Santa Infancia en Tarazona", BOE de Tarazona y Tudela, año 71, 15 de febrero de 1933, núm. 725, págs. 76-77.

Ya se llegaría al mes marzo cuando el boletín eclesiástico de Oribuela reseñaría la conferencia pronunciada por el padre Enrique HERRERA relativa a uno de los puntos que, como hemos visto, se habían tratado en febrero en las jornadas de Barcelona: "¿Qué derechos se le conceden al padre de familia en España y en el extranjero?" y que había sido organizada por la agrupación "Defensa y libertad de los padres en la educación de los hijos". En su intervención el conferenciante se había referido especialmente a la coacción que el Estado ejercía sobre el mundo obrero al privarle de poder elegir escuelas católicas para sus hijos imponiéndole un tipo de escuela "gratuita, obligatoria y laica". Frente a ello la justicia exigía el reparto proporcional escolar ya que no bastaba con abrir muchas escuelas, estas deberían acoplarse a la voluntad del pueblo "que es el que las paga", tal como se hacía en otros países. Si el obrero no tenía medios para pagar la escuela católica y esta le era ofrecida gratuitamente por el sector privado, tal escuela no podía cerrarse aunque la rigiera una orden religiosa; si los particulares no mantuvieran enseñanza gratuita, al Estado correspondía facilitarla, pero de forma que los obreros pudieran elegir libremente que tipo de escuela querían y qué clase de maestros, tal como hacían las democracias modernas. Había aludido el padre HERRERA, para acabar, al hecho -que ya hemos visto destacado por "El Debate"- del otorgamiento por el Estado español de subvenciones para los colegios judíos de habla francesa en Langen, mientras que tal subvención no se concedía a los católicos españoles y a como el Estado proyectaba arrojar de las escuelas hispanas a los maestros religiosos "de seiscientos mil niños, en su mayoría hijos de obreros", hecho que, a su juicio, implicaría "un

escandalo pedagogico mundial".⁽³⁰²⁾

A otra conferencia aludiría el boletín eclesiástico de Segovia al relatar la pronunciada por un miembro de la "Confederacion nacional de Padres de Familia" en un acto que "en defensa del niño, de la familia y de la sociedad" había organizado la "Asociacion Local de Padres de Familia" el Domingo de Ramos, acto al que habia concurrido un "numeroso publico" y en el que el conferenciante habia tratado de la escuela laica y unica y de los males de su implantacion, asi como del programa de reivindicacion de la libertad de ensenanza en el que destacaba "la propaganda activa y continua, la creacion de centros catolicos y las obras postescolares"; como conclusion de su intervencion habia exhortado a todos "al sacrificio para salvar el alma de los niños y el porvenir de España."⁽³⁰³⁾

Fue "El Debate" y no el boletín eclesiástico de la archidiócesis el que publicaria el 21 de abril la noticia de la inauguracion por el arzobispo de una escuela parroquial en Zaragoza, en la que se indicaba que "por el momento sólo recibirán instruccion 80 niños".⁽³⁰⁴⁾ A esta noticia, que destacaba como por parte del clero y fieles se iban secundando las directrices de los prelados hay que anadir la publicada por el mismo periodico ya en el mes de agosto y que daba cuenta de la solicitud cursada al gobierno para la creación de tres "escuelas libres" en Bilbao, una de ellas

(302) s.f. "La escuela católica en el extranjero. Se reconoce a los padres de familia el derecho que se les niega en España," BDE de Orinuela, año 52, 1 de abril de 1933, núm. 6, pags. 61-62.

(303) "Una conferencia en pro de la familia", BDE de Segovia, año 78; 15 de abril de 1933, núm. 7 pags. 174-175

(304) "El Debate" 21 de abril de 1933

de segunda enseñanza, señalando que las tres serían confesionales y estarían apoyadas por los nacionalistas vascos.⁽³⁰⁵⁾ Mas junto a estas noticias queremos reseñar las actuaciones de signo opuesto que también se seguían y que corroboran la falta de una política coherente en el tema de la creación de escuelas libres confesionales; así, el 19 de febrero había publicado "El Sol" que el presidente de la "Asociación de Trabajadores de la Enseñanza", adscrita a UGT, había dirigido un telegrama a los ministros de Gobernación e Instrucción pública protestando contra la autorización de una escuela "dirigida por señoritas y patrocinada por el parroco de Aldán"⁽³⁰⁶⁾ y ya en el mes de septiembre sería otra vez "El Debate" el que daría cuenta de la publicación efectuada por el "Diario de Valencia" denunciando al gobernador civil el cierre decretado por el alcalde de Alberache de "una escuela católica abierta en aquella localidad y que funcionaba con arreglo a la legislación vigente", para lo cual se había personado en ella sellando sus puertas. El gobernador había confirmado el hecho a los periodistas exponiéndoles que el alcalde había actuado así fundándose en que la Constitución determinaba que la enseñanza había de ser laica e informándoles que para la reapertura del centro había que esperar a "que se declare lo que sobre el particular determine el decreto que rige la fundación de escuelas o bien a lo que resuelva sobre este asunto el Consejo Provincial de Primera enseñanza".⁽³⁰⁷⁾

(305) "El Debate", 26 de agosto de 1933

(306) "El Sol", 19 de febrero de 1933.

(307) "El Debate", 28 de septiembre de 1933

También en el mes de septiembre aparecía otra noticia relacionada con la creación y funcionamiento de escuelas privadas, esta vez reseñada por un boletín eclesiástico, el de Segovia, en el que se publicaba "una disposición interesante para las instituciones benéfico-docentes", sin duda para que sirviera de orientación a quienes detentaban escuelas que pudieran hallarse en iguales condiciones. Se trataba de una resolución insertada en el boletín oficial del ministerio de Instrucción pública, de la que no se consignaba la fecha, y en cuyos resultandos se aludía a la construcción y cesión al pueblo de Herencia de un grupo escolar sufragado por un matrimonio en 1929, cesión que se había efectuado con la condición de que la enseñanza que en él se impartiera había de ser acorde con la religión católica revirtiéndolo, en caso contrario, a los donantes o sus herederos. El Patronato central de enseñanza "en razón de no oponerse a ello ninguna de las disposiciones legales vigentes", proponía se accediera a lo solicitado por los donantes y, en consecuencia, que en dichas escuelas "fuera de las horas de clase y por personas extrañas al personal docente oficial, pueda enseñarse el Catecismo cristiano, jueves y domingos, a los obreros que deseen aprenderlo", propuesta que el ministerio aceptaba³⁰⁰ incurriendo en la contradicción jurídica de permitir la enseñanza religiosa, si bien fuera del horario lectivo, como fuera el primitivo diseño de 1931, en una escuela municipal, cuando aquella había quedado totalmente prohibida en todos los centros oficiales.

(300) "Decisiones del poder civil. La enseñanza del catecismo", BDE de Segovia, año 70, 30 de septiembre de 1933, núm. 18, págs. 425-426. También publicado en el BDE de Tarazona y Tudela, año 71, 31 de octubre de 1933, núm. 742, págs. 713-714.

Mucha mayor difusión que las noticias hasta aquí reseñadas sobre creación de centros de enseñanza tendría la iniciativa del "Centro Superior de Cultura Femenina" instalado en la calle de Padilla de Madrid, centro que, como se relataba en las crónicas de los boletines diocesanos, era una obra "muy necesaria, pues si existen en España diez universidades para hombres, no existe ninguna para mujeres, con ser varios millares las que hoy siguen estudios superiores". Este centro, que había comenzado en 1932,⁽³⁰⁹⁾ estaba dirigido por un grupo de académicos y catedráticos, estando a cargo de una "Junta femenina" su régimen interno. El patronato rector había dirigido a todos los prebendados una carta-circular explicando los fines de la institución y las razones de su creación, carta que unos boletines diocesanos insertaron, limitándose otros a dar cuenta de su creación. La filosofía subyacente en la citada carta en orden a la consideración del papel la mujer en la sociedad venía cargada, bajo visos de un progresismo que la evolución social española de la época hacía inevitable, de tópicos y consideraciones centradas en un espíritu tradicional y, por tanto, típicamente patriarcal.⁽³¹⁰⁾ Pese a la oferta de formación superior y los detalles que, respecto a ella, se contenían en la citada carta e incluso el interés de sus

(309) Ver sobre el particular *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, pag. 168, nota 8. Es especialmente reveladora de la imagen de mujer que el Centro quería crear la carta dirigida por el conde de CEDILO al cardenal VIAL el 23 de septiembre de 1932.

(310) La reseña de la creación del centro fue publicada, entre otros, en los siguientes boletines diocesanos:

s.f., "Centro de Cultura Superior Femenina", BOE de Oviedo, año 66, 1 de junio-15 de julio de 1933, núm. 4, págs. 82-83. No es de extrañar que el boletín diocesano de Oviedo fuera uno de los primeros en dar cuenta de la creación del Centro pues el Dr. LUIS y PEREZ, consiliario general de Acción Católica, era uno de sus protectores. No obstante este boletín no publicó la carta del patronato rector.

patrocinadores en llegar a convertirla en una Universidad católica femenina, ni Angel HERRERA, ni la Junta Central de Acción católica (que, como hemos visto, propugnaban la creación de Universidades católicas masculinas y femeninas) se fiaban de la solvencia cultural del Centro.¹³¹¹

Mientras estas noticias de creación de instituciones a todos los niveles se iban produciendo, seguían los boletines diocesanos dando cuenta de los actos celebrados en relación con la situación de la enseñanza católica en España. Así, el 2 de mayo publicaría el de Orihuela la reseña de la conferencia pronunciada por el Secretario de la "Confederación de Padres de Familia", como complemento de otras que, organizadas por la Asociación local, se venían

s.f. id.id. BOE de Segovia, año 78, 29 de julio de 1933, núm. 14, págs. 348-349.

s.f. id.id. BOE de Zaragoza, año 72, 16 de agosto de 1933, núm. 17, pág. 285.

s.f. id.id. BOE de Orihuela, año 52, 16 de agosto de 1933, núm. 13, págs. 151-154.

s.f. "Acción Católica y Social en España". BOE de Gerona, 28 de septiembre de 1933, núm. 9, págs. 341-346. Este Boletín, además de publicar la carta del Patronato rector del Centro, incluía un escrito del propio Dr. PERELLÓ exhortando al apoyo del mismo y al envío de alumnas.

s.f. "Variedades, Centro de Cultura Superior Femenina", BOE de Toledo, año 89, 5 de octubre de 1933, núm. 13, pág. 276.

s.f. id.id. BOE de Astorga, año 81, 10 de octubre de 1933, núm. 15, págs. 263-264.

s.f. id.id. BOE de Málaga, año 66, octubre de 1933, núm. 12, pág. 363.

s.f. id.id. BOE de Vich, año 79, 31 de octubre de 1933, núm. 2132, págs. 488-490.

s.f. id.id. BOE de Tarazona y Tudela, año 71, 31 de octubre de 1933, núm. 724, págs. 692-693.

s.f. id.id. BOE de Granada, año 88, 10 de noviembre de 1933, núm. 3527, págs. 259-260.

En el apéndice núm. 26 incluimos la carta del Patronato rector publicada por algunos de los boletines referenciados y la exhortación incluida en otros con la noticia de los miembros que formaban aquel patronato.

¹³¹¹ *Església i Estat durant la segona...*, tomo IV, pág. 35. Una exposición de la situación de la mujer en la enseñanza en CAPEL, Rosa M^a, op. cit., págs. 85-105.

pronunciando respecto al plan del curso, y que verso sobre "la Asociación de Padres de Familia ante la escuela laica", indicando el cronista que "los amplios salones de la Casa Social Catolica estaban atestados de publico". El conferenciante se habia desplazado seguidamente a otras localidades de la diócesis fundando las asociaciones para constituir la "Federacion de Padres de Familia de la Diócesis de Orihuela"; a esta noticia añadía la resena que "el numero de asociados crece extraordinariamente de dia en dia" y finalizaba describiendo los actos de caracter piadoso a celebrar con motivo del XIX centenario de la redención, actos que tenían como protagonistas a los niños y niñas de las catequesis en relacion con la supresión del crucifijo en las escuelas privadas.⁽³¹²⁾

También el boletín de Vitoria se referiría por aquellas fechas a diversos actos que habían tenido lugar en la diócesis; así: las conferencias pronunciadas en el seminario por un canonigo de Valladolid, experto catequista, a efectos de la preparacion de los sacerdotes para la catequesis, ciclo de conferencias en el que el exposente no habia dejado de hacer alusion a la politica estatal leyendo un articulo de "El Socialista" en el que se decia que "para salvar a la Republica era necesario prohibir al clero la enseñanza del catecismo", articulo al que habia opuesto observaciones sobre "la correlatividad entre el laicismo y el aumento de suicidios y delincuencia infantil". afirmando que "la moral laica es para reitrenar las pasiones lo que una tela de araña para resistir las acometidas de una bestia furiosa", con lo que habia concluido haciendo una apología de la necesidad del catecismo y la consiguiente condena del laicismo en la

(312) s.f. "Vida diocesana", BOE de Orihuela, año 52, 2 de mayo de 1933, núm. 8, págs. 78-79

enseñanza.⁽³¹³⁾ Otro acto del que trataba el boletín era la inauguración, en Vitoria, de "La Casa del Estudiante", destacando la numerosa asistencia de estudiantes "de ambos sexos" a la bendición de la bandera de los "Estudiantes Católicos" y de los nuevos locales de la Federación, efectuada por el prelado.⁽³¹⁴⁾

Igualmente destinadas a la preparación de los sacerdotes para la catequesis fueron las conferencias organizadas por el vicario capitular de Granada Dr. RODRIGO RUESCA y que habían de celebrarse del 2 al 8 de julio, publicando el boletín diocesano su convocatoria y el temario a impartir, que esencialmente versaba sobre cuestiones de organización catequística.⁽³¹⁵⁾

No cabe duda que uno de los más relevantes actos celebrados en 1933 en torno a la enseñanza del catecismo fue la "Diada catequística" que tuvo lugar en Montserrat para todos los niños de la provincia eclesiástica tarraconense. Fue organizada por el "Comité interdiocesano de pedagogía religiosa" que en 18 de marzo había cursado una carta a todos los prelados provinciales rogando su asistencia, bendición y difusión de su celebración y exponiendo los motivos de esta ("El actual laicismo escolar, que debe ser contrarrestado con actos de ejemplar colectiva piedad infantil; el deseo repetidas veces manifestado por el Romano

(313) s.f. "Conferencias Catequísticas en el Seminario Diocesano", BDE de Vitoria, año 89, 15 de mayo de 1933, núm. 11, págs. 273-275.

(314) 23 de abril de 1933, "La Casa del Estudiante en Vitoria", Ibid. págs. 272-273.

(315) s.f. "Semana catequística", BDE de Granada, año 88, 16 de junio de 1933, núm. 3622, págs. 101-104.

Pontífice de que también los niños tomen parte activa en el Centenario de la Redención; y el anhelo de consolar a nuestros Pastores y a todos los católicos viendo reunidos, cerca de la Virgen, muchedumbre de niños de nuestra tierra..."). La Diada iba destinada tan sólo a los niños, tanto para "facilitar la colaboración de la Escolania" como "para seguir escrupulosamente las normas educativas de la Iglesia", pensando organizarse en otra fecha un acto semejante para las niñas.⁽³¹⁶⁾ La "Diada" se celebró el 25 de junio y, según las reseñas de los boletines eclesiásticos, fue un gran éxito, tanto de organización como de asistencia, pues, rebasando las previsiones, acudieron "unos 15.000 niños y mas de 7.000 personas mayores", trasladados mediante autobuses y trenes especiales desde diversos puntos de Cataluña. La "Diada" consistió en la celebración de una misa, una "velada catequística" y un Vía Crucis, señalando los cronistas la esperanza de que "esta gloriosa jornada catequística dejara un imperecedero recuerdo en los niños y producirá copiosos frutos en nuestras organizaciones catequísticas".⁽³¹⁷⁾ Tal éxito viene en este caso corroborado por el contenido del acta de la Conferencia eclesiástica tarraconense, celebrada el 12 de noviembre, en la que los prelados, ante el "numero insospechado de niños que acudieron" y las consiguientes dificultades de organización, acordaron que la "Diada" de las niñas se celebrara en diferentes jornadas.⁽³¹⁸⁾

(316) 18 de marzo de 1933, "Diada Catequística de la Provincia Eclesiástica Tarraconense en Montserrat", BOE de Urgel, año 78, 1 de mayo de 1933, núm. 5, págs. 70-71. El anuncio de la celebración fue obviamente publicado en todos los boletines de la provincia eclesiástica, así: BOE de Tortosa, año 75, 15 de mayo de 1933, núm. 9, pág. 79; BOE de Barcelona, año 76, 16 de mayo de 1933, núm. 9, págs. 168-169. (Este boletín indicaba que se preveía la asistencia de doce mil niños); BOE de Tarragona, año 69, 31 de mayo de 1933, núm. 8, pág. 88.

(317) "Diada Catequística en Montserrat", BOE de Tarragona, año 69, 30 de junio de 1933, núm. 10, págs. 199-200; BOE de Barcelona, año 76, 30 de junio de 1933, núm. 12, págs. 230-234...

(318) *Església i estat durant la Segona...*, IV, pág. 148

Acto de mayor trascendencia que este fue, no obstante, la realización de la "III Asamblea de Padres de Familia" -a la que en 1933 se dio mayor relevancia y más extenso tratamiento en los distintos boletines diocesanos que el dado al mismo acontecimiento en 1931 y 1932-⁽³¹⁹⁾ celebrada en Vitoria del 27 al 30 de julio de 1933, que comenzó con la organización previa de unos ejercicios espirituales a los que asistieron ciento ochenta y siete ejercitantes procedentes de toda España,⁽³²⁰⁾ y que, en esta ocasión, despertó un decidido interés de las autoridades eclesiásticas; así, antes que lo hiciera el boletín eclesiástico de Toledo, publicaron otros boletines diocesanos la carta, sin fecha, dirigida por GOMÁ al Presidente de la Confederación de Padres de Familia con motivo de la citada Asamblea y en la que, con terminología bastante reveladora de la actitud del nuevo primado ante la política de la República, se congratulaba de su celebración y del camino y logros conseguidos o a alcanzar por la Confederación:

"En la lucha para reconquistar nuestras libertades escolares, hoy, más que cercenadas, casi anuladas por un laicismo desenrenado y agresivo, los Padres de Familia han de ocupar un puesto de vanguardia. Lo ocupan ya valerosamente; mas si la campaña emprendida es triunfo, es preciso que esas trescientas Asociaciones y esa legión de cincuenta mil padres de familia se multipliquen hasta que no haya pueblo sin una Asociación ni un padre católico que no este asociado para defender las almas de sus hijos.

«Será menester vencer inercias, despertar entusiasmos, crear vínculos de solidaridad, sin lo

(319) Ver las notas 95 y 142.

(320) s.f. "Los ejercicios espirituales de Padres de Familia Católicos", BDE de Vitoria, año c9, 1 de agosto de 1933, núm. 17, pag. 467.

cual difícilmente se alcanza victoria. Todo esto requiere conductores, caudillos, dirigentes, hombres encendidos en el amor de Dios, prudentes en la lucha, abnegados en el sacrificio que se dediquen en cuerpo y alma a esta cruzada, a la cual va unido en gran parte el porvenir espiritual y temporal de nuestra Patria.

«Esos caudillos surgirán, van surgiendo ya, ante la inesperada y cruel acometida del enemigo. Como en toda lucha de reconquista, los males presentes, los peligros que se prevén para lo venidero, la añoranza del bien perdido y la intemperancia misma del adversario, suscitarán generosos heroísmos; pero aun el heroísmo, para que no se frustre en estériles intentos, necesita una táctica sabia y una formación técnica.

«Para ello servirá la proxima Asamblea Confederal, en la cual se estudiará la misión del padre en el hogar, en la familia, en la escuela. Los directores de las Asociaciones adquirirán una visión clara del campo en que han de moverse, del plan que han de seguir, de los métodos y medios más eficaces para vencer. Lo hecho hasta ahora enseñará lo que para en adelante se haya de conservar, o corregir, o perfeccionar.» (321)

(321) s.f. "Carta del Dr. Gómá al Presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia". BOE de Vitoria, año 69, 1 de agosto de 1933, núm. 17, pág. 448. También, entre otros, en BOE de Valencia, 1 de agosto de 1933, núm. 2176, pág. 249; BOE de Toledo, año 89, 16 de agosto de 1933, núm. 11, págs. 232-233. El BOE de Palencia dio un resumen de la carta exhortando a seguir las directrices del Dr. GÓMA:

"Ahora, cuando en las altas esferas del Gobierno se trabaja activamente para llevar a cabo la sustitución de la enseñanza que daban las Ordenes religiosas, la paternal llamada del Primado no puede, no debe ser desoída por los padres de familia; que han de moverse con mayores actividades que nunca, para que sus hijos tengan un nuevo alimento espiritual de sus almas, en contraposición al veneno laicista que se pretende infiltrar en ellas: es la hora del trabajo reflexivo, sereno y valiente". (BOE de Palencia, año 83, 1 de agosto de 1933, núm. 15, págs. 435-436).

Con independencia de esta carta reseñarían los boletines la remitida por el cardenal PACELLI al nuncio TEDESCHINI y la cursada por este remitiendo aquella al obispo de Vitoria. En la primera trasladaba el Secretario de Estado Vaticano el interés del papa por la actividad desplegada por las asociaciones de padres de familia, a las que deseaba óptimos frutos, al tiempo que enviaba su bendición para esta III asamblea, por la segunda se adhería el nuncio a la atención del Vaticano por las obras a desarrollar por esta organización "en bien de la España católica".⁽³²²⁾

El programa a desarrollar por los asambleístas contenía tres puntos bajo el tema genérico de la "Formación del Padre de Familia": "El Padre de Familia en el Hogar"; "Misión social del Padre de Familia" y "El Padre de Familia y la Escuela", más una conferencia final a pronunciar por Angel HERRERA sobre "La organización de Padres de Familia y la Acción Católica". En las conclusiones adoptadas se insistió en la labor de propaganda, que había de enarbolar como bandera la libertad de enseñanza y el reparto proporcional escolar, en la educación cristiana de los hijos en el seno del hogar, "celula de la Patria", para lo cual la Confederación fomentaría la creación de instituciones específicas para "la formación del padre de familia", y en

(322) 24 de julio de 1933. "Transmitiendo la bendición de S.S. para la IIIª Asamblea de Padres de Familia". BOE de Vitoria, año 69, 15 de agosto de 1933, núm. 18, pág. 473. En la publicación que hizo el boletín de Iuj de estos dos documentos se añadía una nota reiterando el deseo del obispo de que se fundaran asociaciones de padres de familia en toda la diócesis y alabando la "vida pujante" de la que existía en Vigo, cuyo presidente había actuado "brillantemente" en Vitoria y a el podían dirigirse los párrocos que desearan asesorarse (BOE de Iuj, año 74, 20 de septiembre de 1933, núm. 12, págs. 214-216).

la necesidad de que las asociaciones promovieran la creación de escuelas católicas e instituciones complementarias de ellas, debiendo actuar frente a la escuela laica de acuerdo con las directrices del documento colectivo de 25 de mayo de 1933, que debían ser difundidas lo más posible y vigilando la verdadera neutralidad de las escuelas, que debería ser legalmente denunciada cuando se quebrantase. La Asamblea se pronunciaba, por último, en pro de la creación de la Universidad Católica, de acuerdo con la Junta Central de Acción Católica bajo la dirección del episcopado. Como resumen insistían las conclusiones en la necesidad de la formación espiritual y doctrinal de los padres de familia a través de las respectivas asociaciones.³²³⁾

También mayor atención que en los dos años precedentes mereció en 1933 la celebración de la XII Asamblea de la Confederación de estudiantes católicos, que en esta ocasión tuvo su sede en Valencia los días ocho a doce de octubre.³²⁴⁾ La crónica de esta Asamblea, publicada por el boletín de la citada archidiócesis, destacaba la asistencia de "algunos catedráticos de Universidad, técnicos y distinguidos hombres de ciencia" así como la del presidente de la "Asociación de Padres de Familia" y las adhesiones recibidas, entre ellas, las de los cardenales de Tarragona y Sevilla, la de "más de veinte obispos" y la del presidente de la Junta Central de Acción Católica, Angel HERRERA.

323) s.t. "La Asamblea de Padres de Familia de Vitoria", BOE de Orizuela, año 52, 1 de septiembre de 1933, núm. 14, págs. 167-168; BOE de Burgos, año 76, 30 de diciembre de 1933, núm. 21, págs. 376-381.

324) Ver la nota 95.

Al aludir a los temas tratados se indicaba que todos fueron "de carácter técnico y puramente profesional", tal como el reglamento de la confederación prescribía; en ellos se aludió a la creación de un curso público de religión y a la organización de cursillos por las federaciones, cursillos que tratarían de "Religión, Filosofía, Economía; Concepto moderno del Estado; España y América y la Universidad tradicional", igualmente se trató la cuestión de la representación escolar "acentuando la conveniencia de que se implante y de que se rechace el monopolio".¹³²⁵

Otro tema analizado, como no podía ser menos, fue el relativo a la organización de la enseñanza religiosa, con la consiguiente protesta de su ausencia en los centros oficiales, "mutilando por puro sectarismo la integridad de la ilustración en los jóvenes estudiantes", acordándose que los estudiantes católicos asistieran, para suplir aquella ausencia, a los cursos de religión organizados por las autoridades eclesiásticas.

Tras referirse a las otras materias examinadas (como la forma de organizar el Instituto de Estudios Superiores, edad de comenzar el bachillerato, matriculas y libros de texto) así como a los actos de clausura de la Asamblea, (en los que el marques de Lozoya ostentó la representación del rector de la Universidad de Valencia), finalizaba el cronista resaltando que la Asamblea había sido "un éxito bajo todos los conceptos y un exponente de la vitalidad y del empuje de nuestra juventud estudiosa, esperanza de la Religión y de

1325) Ya hemos aludido en la nota anteriormente señalada al predominio de la F.U.E. durante el primer bienio de la II República.

España". 1924.

Mas si los seglares se reunian en las respectivas confederaciones de padres y alumnos para abordar el tema de la enseñanza religiosa, otro tanto harian los sacerdotes de las diversas diocesis a lo largo de 1933. Así, del 25 al 27 de abril tuvo lugar en Oviedo la asamblea parroquial del clero correspondiente a este año y, en ella, entre otras cuestiones relativas a ordenación económica y ramas de Acción Católica, se abordó especialmente el tema de la enseñanza, tratando de la necesidad y modo de organizar legalmente la asociación de padres de familia como instrumento para actuar en la defensa de los derechos de los padres e instruir religiosamente a los hijos, de la libertad de enseñanza y de la familia, exponiéndose la conveniencia de formar una "confederación poderosa, que oriente e influya en las esferas del Estado". Otro tema abordado fue el de la forma de suplir la enseñanza de los colegios de religiosos cuando esta quedara prohibida, lo que creaba un problema económico a las familias por el aumento del presupuesto de Instrucción Pública y porque les sería "mas costosa la instrucción en los Colegios o Academias oficiales que en los de los religiosos que, por su vocación especial y la vida en comunidad cobraban poco", mas, sobre ello, lo peor era el futuro de una educación "en un ambiente de laicismo y de indisciplina" por lo que preciso era sostener abiertos, en su día, aquellos colegios, "poniendo al frente personal técnico y de confianza para los padres, que substituyese las

(326) s.f., "La XII Asamblea Nacional de Estudiantes Católicos en Valencia", BOE de Valencia, 15 de noviembre de 1933, núm. 2183, págs. 366-367. La misma reseña fue publicada con anterioridad por el Boletín de Tortosa (año 75, 31 de octubre de 1933, núm. 18, págs. 168-170). La crónica del de Valencia fue, no obstante diferente, destacando el acuerdo -que no figura reflejado en las aludidas- de "elevar energética protesta por la supresión del catecismo en las Escuelas" (BOE de Valencia, año 83, 16 de octubre de 1933, núm. 20, págs. 578-579).

personas manteniendo la misma enseñanza", labor que también debía hacerse respecto a las escuelas de enseñanza primaria, que podían ser fundadas y sostenidas en los principales centros.

Cifándose más estrictamente al tema de la formación religiosa, los sacerdotes abordaron la cuestión de las "escuelas parroquiales", que -a diferencia de lo que se desprende de la reseña de la asamblea de 1932-¹³²⁷ quedaron claramente definidas y diferenciadas de lo que denominaron "escuela integral" o "escuela católica" como aquellas en que tan sólo se impartía la enseñanza de la religión con mayor asiduidad que en el catecismo dominical, que era insuficiente. Como cuestión complementaria de esta se trató la de las academias para la formación de catequistas.

Sobre todas estas materias se adoptaron las siguientes conclusiones: En el plazo de un mes deberían quedar fundadas asociaciones de padres de familia en las capitales del concejo en que no existieran, creando delegaciones en cada parroquia; igualmente deberían establecerse "escuelas parroquiales" en todas las parroquias, determinándose en cada una de ellas los días y horas de clase adecuados y haciéndose difusión de la doctrina católica por medio de las hojas parroquiales, predicación, constitución de juventudes masculinas y femeninas, recabando la ayuda de las mujeres para la catequesis y debiendo darse a los catequistas la oportuna iniciativa bajo la dirección del párroco, que debería dictar para ellos el correspondiente cursillo de formación.¹³²⁸

(327) Ver la nota 203.

(328) 18 de marzo de 1933, "Circular núm. 8 convocando para una Asamblea parroquial y de Acción Católica", BOE de Oviedo, año 69, 1 de marzo-1 de abril de 1933, núm. 2, págs. 18-21 y "Asamblea parroquial de Acción Católica", ibid. 15 de abril-15 de mayo de 1933 núm. 3, págs. 49-67.

Si bien no consta el cargo eclesiástico del conferenciante Sr. LLORENTE, que se dirigiera al clero de Palencia, reunido en ejercicios espirituales, para tratar el tema de la catequesis, es mas que probable que fuera el mismo especialista en esta cuestión, canonigo de Valladolid según consta en el boletín de Vitoria, que en abril y mayo había impartido en aquella localidad una serie de conferencias, ya que el recurso utilizado en su exposicion había sido el mismo: la lectura de un artículo de "El Socialista", publicado el 20 de enero de 1933 y del que, en este caso, recogia el boletín palentino determinados párrafos no exentos de relevancia, por cuanto en ellos se acusaba a la Republica de haber conseguido que la Iglesia retomara una labor que desde hacia tiempo tenía descuidada y en manos de maestros seculares: la enseñanza de la religion, con lo que la jerarquia había procedido a la consiguiente organizacion, por lo que, se quejaba la articulista, "los niños, que iban camino de vivir una vida recta y luminosa, acuden en masas densísimas a la catequesis". A continuacion de esta lectura el conferenciante, con igual línea seguida en Vitoria, había pasado a exponer el método idóneo para la enseñanza de la catequesis.⁽³²⁹⁾

Otra asamblea sacerdotal en torno al tema de la catequesis de la que nos dan cuenta los boletines eclesiásticos, fue la celebrada en el arciprestazgo de Portugalete, Vitoria, del 3 al 5 de agosto, "con asistencia de casi todos los sacerdotes" de la circunscripción ecles-

(329) S.F. "Crónica diocesana.- Pastoral moderna-catequesis", BOE de Palencia, año 83, 15 de agosto de 1933, núm. 16, págs. 462-471.

siástica; en ella se llegaron a aprobar veintidos conclusiones relativas a los métodos para la instrucción catequística; organización de las catequesis; catequistas auxiliares y formación de los mismos; fundación de la "Congregación de la Doctrina Cristiana" en todas las parroquias e implantación en el arciprestazgo del "Día del Catecismo".³³⁰

El último exponente del interés sacerdotal por la cuestión que nos ocupa publicado en los boletines eclesásticos consultados en el periodo examinado, fue la "IV Asamblea Sacerdotal" que tuvo lugar en la provincia tarraconesa los días 20, 21, y 22 de septiembre, con asistencia de sacerdotes de todas sus diócesis con sus respectivos prelados, y en la que, bajo el lema que hacía referencia a la conmemoración del centenario de la redención, se abordaron cada día los temas relativos a "Catecismo", "Fejocismo" y "Congregaciones Marianas", tratándose, en relación con el primer tema, cuestiones relativas a metodología de la enseñanza religiosa, formación cristiana de la juventud, causas de su apartamiento de la religión y su remedio en conexión con las obras post-escolares orientadas a la acción católica. En el acto de clausura de la Asamblea se destacó "la necesidad de intensificar la labor catequística y cursillos de religión para los efectos de la instrucción religiosa de nuestro pueblo", argumentándose, una vez más, para fundamentar esta necesidad, "que una de las causas, y muy principal, de la lamentable situación de la Iglesia en nuestra patria se debe a la ignorancia religiosa". En función de ello la asam-

330: s.f. "Asamblea Catequística del Arciprestazgo de Portugalete", BOE de Vitoria, año 69, 18 de septiembre de 1923, núm. 20, págs. 541-544

blea declaró en sus conclusiones como "obra de la máxima urgencia la de intensificar por todos los medios adecuados la enseñanza de la doctrina cristiana", adoptándose los debidos metodos pedagógicos y procurándose que el catecismo tomara el carácter de "verdadera escuela de Religión" con textos y material apropiados.⁽³³¹⁾

Con independencia de las reseñas de estas reuniones sacerdotales seguan los boletines publicando noticias sobre la marcha de la organización de la enseñanza. Así, el Secretariado Diocesano de Instrucción Religiosa creado por el Dr. IRASTORZA en 8 de abril de 1932, publicaria en el mes de septiembre las conclusiones extraídas de las respuestas a un cuestionario que, según indicaba, habia sido remitido a todos los párrocos de la diócesis y de cuyo examen se deducia que "en todas las Parroquias, o casi en todas, se ha comenzado a trabajar con diligencia y hasta con ahinco en la enseñanza de la doctrina cristiana", mas que, sin embargo y pese a ello, con tal enseñanza tan solo se habia llegado a cubrir a una cuarta parte de los niños que deberian recibirla. Los informes recibidos revelaban, además, una gran escasez de auxiliares, no teniendo muchos párrocos ninguno o casi ningún catequista, viendo el Secretariado como única solución para remediar este problema el transformar los catecismos tradicionales en "verdaderas escuelas".

Con el fin de estimular la labor sacerdotal destacaba el Secretariado los informes remitidos por los párrocos de Monovar, Elda, Novelda y Almoradi, resaltando del primero la labor desarrollada en el por la "Congregación de la Doctrina

(331) S.F., "IV Asamblea Sacerdotal, Homenaje a Cristo Jesus con motivo del Jubileo Centenario de la Regencia" BOE de Tarragona, año 69, 30 de octubre de 1932, núm. 15, pag. 246-252.

Cristiana" y los métodos seguidos para estimular la asistencia al catecismo; del de Almoradi señalaba que el promedio de asistencia al catecismo ordinario era de trescientas niñas y doscientos niños, llegando a seiscientos los que acudían a la misa catequística, así como la iniciación de un curso superior de religión para jóvenes; respecto al de Novelda destacaba la asistencia de ciento cincuenta niñas al catecismo dominical, que era impartido por "diez señoritas", refiriéndose también a la fiesta de primera comunión realizada; por último, al comentar el de Elda aludía al desarrollo de las clases de catecismo durante cuarenta días (con asistencia, a veces, de unos quinientos niños) y que solo quedaban interrumpidos en el mes de septiembre, y a las clases especiales para los de primera comunión, poniendo de relieve que los familiares de los niños acudían con ellos al catecismo dominical "y no se cansan de alabar y agradecer la labor que se hace en favor de sus hijos y de ellos mismos".

Finalizaba el documento del Secretariado Diocesano haciendo referencia a lo realizado en la capital de la diócesis alabando la perseverancia en las cuatro clases semanales de catecismo y la de las catequistas que las atendían; las fiestas catequísticas realizadas, con exámenes, entregas de premios y actos religiosos, así como las primeras comuniones celebradas.

Como colofón del escrito expresaba el Secretariado su deseo de que cuanto había quedado referenciado sirviera de aliciente a los párrocos "en el penoso trabajo" así como de "adicate de nuestro celo y prenda del fruto que indudablemente cosecharemos en nuestros jóvenes y niños..."⁽³³²⁾,

(332) s.t. "Secretariado Diocesano de Instrucción Religiosa", BDE de Orihuela, año 52, 1.º de septiembre de 1933, núm. 14, págs. 169-171.

La archidiócesis de Sevilla, por su parte, había hecho balance en vísperas de la clausura de curso, y como ya efectuara en 1932, de la labor realizada a lo largo de él bajo la dirección de la Junta diocesana para la enseñanza del catecismo. La "Memoria" de todas las actividades fue presentada "para aliento y estímulo de unos, consuelo de otros y edificación de todos", en una reunión que, como el año anterior, sería presidida por el Dr. ILUDAIN y contaría con la asistencia de las catequesis auxiliares de las distintas parroquias.

Comenzaba la memoria aludiendo a la celebración, en noviembre de 1932, de una fiesta catequística "con el mayor fervor y entusiasmos de todas las catequesis de la ciudad", fiesta que, esencialmente, había consistido en actos de carácter piadoso, para pasar seguidamente a dar cuenta del estado de los centros de catequesis señalando que no solo habían funcionado los abiertos en 1932 sino que se habían establecido otros nuevos y que ya no quedaba ninguna parroquia en la capital que, además de las clases del domingo no las tuviera entre semana, por lo que existían en total treinta y ocho centros catequísticos, ascendiendo a unos cinco mil quinientos niños los que en ellos recibían instrucción religiosa, atendidos por cerca de cuatrocientas señoras y señoritas, muchas de las cuales frecuentaban las clases de pedagogía catequística que se impartían, labor en la que también colaboraban "algunos caballeros y jóvenes".

Junto a estas actividades destacaba la memoria la colaboración prestada por las Hermandades y Asociaciones piadosas de Sevilla, que, en unos casos, habían obsequiado a los niños de las catequesis, en otros habían promovido comuniones generales de niños y, concretamente, la "Federación de Hermandades y Asociaciones" había tenido "muy en cuenta" en el reparto de bonos de comida hecho en Semana Santa "a las familias que mandan a sus niños a la

catequesis". Por otro lado varios jóvenes de dichas asociaciones trabajaban como catequistas e incluso una corradia se había ofrecido a abrir y sostener otro nuevo centro catequístico, destacándose los trabajos que, en pro del catecismo, realizaban los miembros de la "Juventud Católica" de una de las parroquias sevillanas, cuyo ejemplo se brindaba en la memoria al resto de los miembros de esta rama de la Acción Católica en la diócesis.

Respecto a la formación religiosa a impartir a los jóvenes de uno y otro sexo se aludía a los cursos establecidos, a cargo de sacerdotes de la Compañía de Jesús, lamentando que la asistencia de los varones había "dejado mucho que desear", por lo que la Junta tenía en estudio medios para estimular tal asistencia, si bien reconocía que el fundamental no era otro que la convicción que los jóvenes y sus padres deberían tener de la necesidad de la cultura religiosa. Contemplando esta información trataba también la memoria de la formación de los adultos señalando que a lo largo del año se habían impartido los días festivos en la catedral "lecciones de vulgarización teológica" en ciertas misas, destacando que los cultos del templo "se ven cada día mas concurridos".

A pesar de no estar encomendada a la Junta quería también referirse su memoria a "la escuela netamente católica, a la escuela parroquial", de la que, por la explicación que daba y alusiones que hacía, parece referirse a una escuela de enseñanza integral, destacando que era este el campo "donde principalmente hay que renir la batalla de la religión", pues la Iglesia no podía "contemplar impasible ese diabólico empeño en sustraerlas hoy [las escuelas] a su benéfico, espiritual y salvador influjo". Así señalaba cómo en dos parroquias de Sevilla se habían organizado escuelas y en una tercera había surgido la Institución "Escuelas de la Virgen María", donde recibían instrucción doscientos

cuarenta niños, patrocinadas por las hermandades y asociaciones piadosas que radicaban en la feligresía, muestra de "la inyección de espiritualidad y de apostolado" que habían recibido dichas Hermandades y Asociaciones de la acción católica desarrollada en los dos últimos años en Sevilla, fruto de lo cual era que en otras parroquias se estaban proyectando y preparando análogas instituciones.

Tras esta referencia pasaba la memoria a aludir a las celebraciones de primeras comuniones realizadas en Sevilla para dar, seguidamente, sucinta noticia de lo realizado en los pueblos de la diócesis, de los que se limitaba a decir que no había habido motivo especial para comunicarse con la mayor parte de ellos, "suponiendo" que continuarían su labor de acuerdo con las normas recibidas y haciendo constar tan solo que a los cientos quince que el curso anterior comunicaron haber fundado la "Asociación de la Doctrina Cristiana" había que sumar otros diecisiete que lo habían realizado durante ese curso, destacando muy escueta y superficialmente "datos muy consoladores" recibidos de algunas parroquias sobre el número de catequesis, alumnos y comuniones, con lo que parece desprenderse que la actuación y control de la Junta, o bien se ceñía esencialmente a la capital, o bien era poco efectiva respecto a las parroquias de los pueblos de la diócesis sobre las que, como se ve, la memoria eludía el entrar en el análisis de su situación, pese a que el escrito del cardenal de 1 de octubre, publicado en el mismo número del boletín, daba a entender, en franco contraste con la descripción de las realizaciones efectuadas en la memoria de la Junta, que la situación en aquellas parroquias no debía ser muy esperanzadora.

Terminaba la memoria aludiendo a la próxima celebración de una "gran Asamblea Eucarística infantil" sólo para niños y elogiando el celo desplegado a lo largo del curso por las catequistas, a las que exhortaba a continuar su labor.⁽³³³⁾

Un tono muy distinto al utilizado por el cardenal sevillano al dirigirse a sus parrocos en el aludido escrito de 1 de octubre sería el que utilizaría el Secretariado Catequístico de Tarazona para llamar la atención de los parrocos de la diócesis sobre la falta de remisión de los datos relativos a días de celebración de las catequesis, número de alumnos, catequistas, etc., de acuerdo con lo determinado en los "Estatutos de la Congregación de la Doctrina Cristiana" y en armonía con los mandatos contenidos en la pastoral del ahora primado Dr. GOMA de 14 de octubre de 1932. Se refería, así, el Secretariado a lo "bien organizada y atendida en esta diócesis" que estaba la enseñanza catequística, estimando que eran las muchas ocupaciones que pesaban sobre los sacerdotes la causa que fueran "contados" los que habían remitido los datos relativos a 1932-1933; por ello encarecía esta remisión a fin de llevar la estadística que permitiera comprobar si la enseñanza del catecismo progresaba o decaía, analizar lo que restara por hacer y aprovechar lo que la experiencia enseñara, estudiando las causas por las que los niños no acudían a la catequesis y ponerles remedio.⁽³³⁴⁾

(333) s.f. "Memoria de los trabajos realizados bajo la dirección e impulso de la Junta diocesana para la enseñanza del catecismo durante el curso de 1932 a 1933". BDE de Sevilla, año 76, 5 de octubre de 1933, núm. 1231, págs. 249-256.

(334) 15 de noviembre de 1933, "Del Secretariado Catequístico", BDE de Tarazona y Tudela, año 71, 15 de noviembre de 1933, núm. 743, págs. 761-763.

Cerramos esta sucinta referencia a las publicaciones efectuadas por los distintos boletines eclesíasticos examinados de las actuaciones seguidas en las distintas diócesis respecto a la cuestión de la enseñanza de la religión, con el anuncio efectuado por el Secretariado Catequístico Diocesano de Valencia de la celebración de un "Cursillo de pedagogía catequística", ya en las fechas del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1933, dirigido a los sacerdotes y a los seglares catequistas de ambos sexos y cuyo objetivo era enseñar a organizar una catequesis en la forma más práctica y que sus explicaciones estuvieran al alcance y fueran atractivas para las mentes de los niños, a fin de "conseguir para su inteligencia la máxima luz sobre la verdad religiosa y para su voluntad la mayor firmeza en la práctica de las virtudes, de modo que preparemos una generación venidera solidamente cristiana". Es interesante resaltar que este "anuncio" comenzaba constatando, una vez más, que "hoy más que nunca es reconocida como imprescindible y urgente la necesidad de enseñar el catecismo a los niños", razón por la que, junto a la de seguir las exhortaciones del prelado, se ofrecían "cada día mayor número de catequistas seglares como auxiliares de los señores curas en tan importante trabajo", noticia de la que se desprende el interés en resaltar nuevamente la reacción que iban teniendo los fieles ante las directrices de la jerarquía en relación con la enseñanza de la religión. ""

Como breve resumen de una cuestión tan crucial tanto para el nuevo régimen, una de cuyas coordenadas ideológicas esenciales era la modernización de una sociedad anclada en

(335) s.f. "Secretariado Catequístico Diocesano", RDE de Valencia, 15 de noviembre de 1933, núm. 2193, págs. 364 a 366.

estructuras anacrónicas, como para la Iglesia que, hasta entonces, había gozado del privilegio de que su doctrina y sus símbolos fueran centro de la enseñanza oficial, hay que destacar, en primer lugar, la urgencia de aquel en afrontar la reforma escolar, a fin de posibilitar las libertades de conciencia y pensamiento proclamadas en el Estatuto Jurídico del gobierno provisional y, como segundo aspecto, el esfuerzo de esta en detender la presencia en el ámbito de la enseñanza oficial, tanto de unas imágenes que reverenciaba la mayoría del pueblo, como de una doctrina que había informado toda su historia y que, según ella, era necesario que siguiera conociendo no sólo para la salvación eterna, sino incluso para el bien material de toda la sociedad.

Esa destacada urgencia sería causa, empero, de la precipitada actuación del gobierno provisional, precipitación que se reflejaría en tres niveles: en el sociológico, queriendo incidir demasiado prematura y autoritariamente en unas costumbres sociales que informaban la mayoría de las actitudes de padres, alumnos y maestros; en el jurídico, dictando una serie de normas no siempre acordes con las necesarias garantías en la producción de las fuentes del Derecho y, en fin, en el económico, con una indudable falta de previsión sobre los recursos, tanto materiales como personales, con que podía contar el nuevo sistema para ofrecer la educación que, a nivel constitucional, llegó finalmente a perillarse.

El empeño secularizador de la República en cuestión tan relevante para la Iglesia como la de la enseñanza y el querer desterrar de ella cuanto pudiera tener carácter confesional, hizo que la jerarquía alzara su voz insistentemente en defensa de la posición que hasta entonces había venido detentando.

Mas sus palabras no fueron en este caso solo de defensa: el episcopado tuvo que constatar, casi con caracter general, el descuido eclesiastico en la formacion religiosa del pueblo y tuvo tambien que aprestarse a poner los medios para paliar el nuevo estado de cosas, esforzandose en la creacion de puntos de ensenanza de la religion sustitutorios de la que hasta entonces se habia venido impartiendo por los propios maestros oficiales y exhortando a los fieles para que asumieran, por medio de la creacion de centros escolares confesionales, o por su colaboracion en las catequesis, unos deberes que hasta entonces habian estado encomendados al Estado y que este, ahora, solo podia ver como infundados privilegios.

El aldabonazo que despertaba a la Iglesia española de un letargo de siglos y que le obligaba a hacer examen de conciencia sobre el tiempo perdido en materia de formacion religiosa, lamentandose, en casos, de la falta de una religiosidad en el pueblo que otras veces habia exaltado, forzo a los obispos a llamar reiteradamente la atencion de los fieles sobre la necesidad de que sus hijos recibieran formacion en la fe catolica, ya que, segun la mayoria de ellos, sin tal formacion no solo no podia existir un ser humano integral, sino que toda sociedad iba hacia su propia ruina.

Nuevamente en estas exhortaciones del episcopado español aparece un abanico de posturas: desde las mas beligerantes (es paradigmatico el pensamiento del obispo de Palencia, Dr. Parrado), a las que, para la concepcion catolica de la epoca, hay que calificar de moderadas, siendo numerosos los obispos que, una vez suprimida totalmente la ensenanza de la religion en los centros escolares oficiales, si bien defenderian, a tenor de lo establecido en elCodigo de Derecho canonico, la prohibicion de que los hijos de los catolicos asistieran a las escuelas laicas sin la previa

autorización del prelado, no adoptarían en este punto una postura excesivamente rígida.

No obstante, hay que concluir, que en este, como en todos los demás aspectos que atañían a la secularización del entramado social, abundaron más las posturas intransigentes que las conciliadoras, tanto por parte del poder civil, queriendo transformar demasiado rápidamente todos los ámbitos de la enseñanza, como del eclesiástico que, salvo contadas excepciones, alzaría la voz para excitar a los fieles contra un régimen que calificaba de ateo y perseguidor de sus derechos.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales

R. 48173

L
322.2 (46) 1931/1939
F R I

**LA JERARQUIA ECLESIASTICA
ESPAÑOLA ANTE LA LEGISLACION
SECULARIZADORA DEL PRIMER BIENIO
DE LA SEGUNDA REPUBLICA**

DONATIVO

TOMO II



M.^a del Carmen de Frías García

Madrid, 1992

Colección Tesis Doctorales. N.º 333/92

X-53-082764-5

© M.ª del Carmen de Frías García

Edita e imprime la Editorial de la Universidad
Complutense de Madrid. Servicio de Reprografía.
Escuela de Estomatología. Ciudad Universitaria.
Madrid, 1992.

Ricoh 3700

Depósito Legal: M-37238-1992

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

=====

Facultad de Ciencias Políticas y Sociología

Departamento de Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales.

LA JERARQUÍA ECLESIASTICA ESPAÑOLA ANTE LA LEGISLACION
SECULARIZADORA DEL PRIMER BIENIO DE LA SEGUNDA
REPUBLICA

- Tesis doctoral -

Autora: MA del Carmen de Frías García.

Director: Carlos Corral Salvador, S.J.
Catedrático de Derecho Público y
Relaciones Iglesia y Estado.

MADRID

1991

---000---

**LA JERARQUÍA ECLESIASTICA ESPAÑOLA ANTE LA LEGISLACION
SECULARIZADORA DEL PRIMER BIENIO DE LA SEGUNDA
REPÚBLICA**

- Tesis doctoral -

T O M O I I
=====

Autora: MA del Carmen de Frías García.

Director: Carlos Corral Salvador, S.J.
Catedrático de Derecho Público y
Relaciones Iglesia y Estado.

MADRID

1991

CAPÍTULO IV

=====

LA LEGISLACIÓN SOBRE MATRIMONIO Y DIVORCIO

1. Las primeras palabras de la jerarquía, el decreto de 3 de noviembre de 1931 y el documento colectivo sobre la Constitución.

- 1.1. Las primeras palabras de la jerarquía: El mensaje de la provincia eclesiástica tarraconense a las Cortes constituyentes.- Las pastorales de los obispos de Tuy y de Vich condenando el matrimonio civil y el divorcio y la pastoral del obispo de Oviedo defendiendo el matrimonio tradicional.

Fue el 19 de agosto de 1931, fecha del "Mensaje de los prelados de la provincia eclesiástica tarraconense a las Cortes Constituyentes", cuya genesis, finalidad y temática ya hemos analizado, cuando los obispos españoles aludieron por primera vez al tema del divorcio, siendo este, en unión del del matrimonio, uno de los que con mayor novedad serian tratados por la legislación secularizadora de la República, si bien, y como seguidamente veremos, ambas cuestiones no serian objeto de excesiva atención por parte de la jerarquía en comparación con sus pronunciamientos sobre otras materias.

En el apartado que el mensaje dedico a estas cuestiones expresaron los obispos de Tarragona su esperanza y deseo de que los diputados, separandose del anteproyecto de la constitución, se abstuvieran de legislar sobre una materia en la que, a juicio eclesiástico, no tenia el poder civil potestad alguna, llegando a calificar esta posible potestad estatal como atentado contra la libertad. De esta forma

expresaban los obispos su esperanza de que las constituyentes "no dejarán que se concreten en texto legal las no bien pensadas aspiraciones de algún sector, deseo que el Estado invada como árbitro absoluto los santuarios de la vida conyugal", lo cual "fuera conculcar desatentadamente derechos fundamentales y augustos; fuera ejercer la coacción más repugnante contra la libertad humana". Tanto las leyes humanas como las divinas defendían la monogamia, el poder paterno y marital y la indisolubilidad del matrimonio, "lógicamente indisoluble, y eso en bien de la mujer, de los hijos y de la sociedad". "En nuestros días se aspira a cubrir, dándole el nombre de matrimonio civil, con velo de legalidad, el concubinato de los divorciados..."; contra el divorcio había hablado recientemente Pío XI en su encíclica sobre el matrimonio cristiano: "ni los decretos de los hombres, ni las convenciones de los pueblos, ni la voluntad de ningún legislador" podían anular la Ley divina, la cual se refería "a cualquier matrimonio, aun al solamente natural y legítimo, pues es propiedad del verdadero matrimonio la indisolubilidad, en virtud de la cual la solución del vínculo está fuera del alcance del beneplácito de las partes y de toda potestad secular".⁽¹⁾

Como se desprende del contenido de este apartado, claramente señalaban los obispos cual era la postura de la Iglesia en orden a la legislación que iba a comenzar a gestarse, postura que, como hemos apuntado, sería seguida, lógicamente, aunque en forma más sucinta, por el documento elevado a las Cortes por la provincia eclesiástica de Sevilla y mencionada en el telegrama enviado por la de Burgos. Sin embargo, hasta el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931, la jerarquía española no iba a volver a referirse al tema más que con alguna corta alusión destinada a los fieles en las pastorales tradicionales.

(1) Ver el epígrafe 4.1, del capítulo "La Constitución de 1931".

Sólo dos excepciones cabe hacer a esta regla general y fueron, entre la documentación consultada, las de los obispos de Iuy y de Vich, a cuyas exhortaciones monográficas sobre el proyecto de constitución ya nos hemos referido. Recordamos, así, que el 20 de agosto el Dr. GARCÍA y GARCÍA suscribiría una extensa pastoral "sobre la hora presente de España" en la que, tratando de dicho proyecto, tuvo párrafos de gran dureza para las previsiones en el contenidas sobre la cuestión del divorcio⁽²⁾. También el obispo de Vich, al glosar el "documento colectivo" de SEGURA de 25 de julio se había detenido especialmente, como hemos apuntado, y aunque en dicho documento no se descendiera a tratar detalladamente la cuestión, en el tema del divorcio, tal como se preveía fuera tratado por las Cortes.

Siguiendo el esquema de los restantes puntos que trataba en su alocución pastoral, el Dr. PERELLÓ se ceniría a recordar las proposiciones del "Syllabus" condenando el divorcio y a puntualizar a sus fieles que, para los cristianos, el matrimonio era un sacramento, por lo que "cualquier unión del hombre y de la mujer que no sea sacramento, aunque se haga en virtud del poder civil, no es otra cosa que un vergonzoso y criminal concubinato". Mas no se detenía la Iglesia en estas condenas, puntualizaría el prelado: al no ser el contrato matrimonial, en virtud de su carácter sagrado, como los demás contratos, no podía ser anulado por los interesados, llegando así a afirmar, en lo que parece una excesiva injerencia del catolicismo de la época, que era tan fuerte el vínculo matrimonial "que es indisoluble aun entre infieles". Por todo ello concluía el Dr. PERELLÓ recordando que

"... si llegare el caso, Dios no lo permita, que en nuestra patria se promulgara alguna ley favora-

(2) 20 de agosto de 1931, "Exhortación pastoral sobre la hora presente de España", BOE de Iuy, año 72, 27 de agosto de 1931, núm. 15, págs. 361-369. Ver el tratamiento que hizo de este tema en el epígrafe 5 del capítulo "La Constitución de 1931".

ble al divorcio en cuanto al vínculo, no tendría eficacia alguna ante el tribunal de Dios, los que a ella se acogieran serían reos de eterna condenación."⁽³⁾

Con independencia de estos dos prelados y de las gestiones efectuadas por el cardenal VIDAL y la comisión de metropolitanos cerca del gobierno en vísperas de la votación del articulado constitucional relativo a la cuestión religiosa, y en las que, como hemos dejado reseñado, también se trataría de la cuestión del divorcio y del matrimonio civil,⁽⁴⁾ la generalidad de los obispos se referirían a esta cuestión en forma incidental a lo largo de 1931.

Tal haría el obispo de Oviedo, Dr. Juan Bautista LUIS Y PÉREZ, que al dirigir una pastoral a sus fieles con motivo de la festividad de la Inmaculada, tras analizar otra serie de temas, trataría del matrimonio en unos términos que apuntaban más a despertar una emotividad tradicional -ajena a todo principio que tratara de la autodeterminación y libertad de la mujer- que a conducir a los católicos a un análisis racional de la cuestión a la luz de la fe:

"Pidámosle a la Virgen que defienda las santas libertades del Papa y de la Iglesia, la libertad de... constituir los hogares españoles sobre el incommovible cimiento de su grandeza, que es la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Pedirle esto a la Santísima Virgen con especial fervor las Hijas de María, todas las jóvenes católicas, porque el divorcio es un atentado a vuestros derechos de hijas de familia, a vuestra futura y excelsa dignidad de madres y esposas, es la

(3) 24 de agosto de 1931, "Alocución pastoral sobre el anterior documento", BOE de Vich, año 77, 31 de agosto de 1931, núm. 2080, págs. 443-451. Ver los puntos restantes del documento en el epígrafe 5 del capítulo "La Constitución de 1931."

(4) Ver el epígrafe 8 del capítulo citado.

pendiente segura que arrastrará a la mujer primero a la degradación del amor libre y luego a la consiguiente esclavitud."'''

1.2. El decreto de 3 de noviembre de 1931.

Pero mientras la jerarquía eclesiástica se mantenía en estos términos un hito importante iba a producirse con la promulgación del decreto de 3 de noviembre de 1931 que, provisionalmente y como medida de urgencia, publicó el ministerio de Justicia con el fin de amparar a los ciudadanos en el disfrute de sus derechos civiles en tanto no se publicaran las leyes reguladoras del derecho de familia. Dicho decreto, pergenado en la línea de devolver al poder civil "las atribuciones de que el Estado había hecho dejación en manos de la Iglesia", dejaba sin efecto las conferidas en 1868 a los tribunales eclesiásticos, que otorgaban a éstos el conocimiento de las causas de divorcio y nulidad de los matrimonios canónicos, reconociendo plena eficacia civil a las sentencias de dichos tribunales. Ello tenía como consecuencia que "el fallo de una entidad extraña a la soberanía del Estado venía a crear, modificar y extinguir derechos civiles cuya salvaguardia es de la exclusiva competencia de éste".

Disponía así la nueva norma que los tribunales ordinarios serían "los únicos competentes para conocer, con efectos civiles, de las demandas sobre divorcio y nulidad de matrimonio, cualquiera que sea la forma de su celebración" (artículo primero); estableciendo -lo que

(5) S.F., "Fiesta de la Inmaculada, El Dogma y la Oración, Carta Pastoral del Rvdo. Sr. Obispo de Oviedo", BOE de Oviedo, año 67, 1 de diciembre de 1931, nº 23, págs. 345-352.

suponia darle caracter retroactivo- el procedimiento para la efectividad de las sentencias de tribunales eclesiásticos dictadas a partir del 14 de abril, o de aquellas causas que estuvieran siendo sustanciadas en la fecha de entrada en vigor de la disposición, dejando subsistente, en su artículo adicional, "a virtud del derecho interno de la Iglesia, como persona jurídica, cuanto concierne al procedimiento canónico de los matrimonios contraídos ante la Iglesia católica".''

La primera reacción ante esta disposición legal por parte del catolicismo fue un extenso editorial de "El Debate" publicado el día 6 de noviembre. Calificaba en él al decreto de "monstruosidad jurídica" diciendo que con el pretendía DE LOS RÍOS "destruir la potestad de la Iglesia" y que significaba un atentado a su soberanía espiritual, toda vez que "el Estado invade ahora un campo que no es suyo y sustrae a la Iglesia la potestad judicial sobre el matrimonio canónico que de un modo exclusivo le compete... , el contrato matrimonial entre cristianos no puede separarse del sacramento". Pero, tras hacer esta protesta -que acompañaba de un extenso comentario histórico sobre la potestad judicial de la Iglesia-, pasaba a aludir a una cuestión que, como veremos, no tratará la jerarquía al referirse a la norma en el documento colectivo de 20 de diciembre de 1931, aunque si lo hara, muy extensamente y dando una solución opuesta a la apuntada por el diario, en el monográfico sobre el matrimonio de 25 de julio de 1932, como mas adelante expondremos. Así, bajo la calificación de "el aspecto práctico de la cuestión", señalaría el editorial que "la conciencia católica española, verdaderamente tal, repudiará, sin duda, estas horcas caudinas que le presenta el ministro de Justicia. Ningún católico encomendará exclusivamente sus asuntos de

(6) Gaceta de Madrid, nº 308, 4 de noviembre de 1931. Ver el apéndice núm. 1.

matrimonio a Tribunales que no puede admitir como competentes... ello implicará... una nueva carga para los católicos que en sus causas matrimoniales necesiten, a más de la satisfacción de la conciencia, los efectos civiles. Porque habrán de acudir primero a los Tribunales eclesiásticos y luego a los del Estado, encontrándose no solo a lo mejor con duplicidad de sentencias, sino con tarifas y gastos dobles." (17)

El tema fue indudablemente recogido por el episcopado a nivel, al menos, de los metropolitanos ya que, aunque no se refleje en el acta de la conferencia mantenida los días 18, 19 y 20 de noviembre de 1931, sí aparece en el punto XV de esta, entre las cuestiones de las que, como hemos visto, debían quejarse al presidente del gobierno los cardenales de Tarragona y Sevilla en la visita que la conferencia acordó que le realizaran, la relativa a la "denegación de efectos civiles a las sentencias de los Tribunales eclesiásticos en las causas matrimoniales".

(17) "La potestad judicial de la Iglesia". "El Debate", 6 de noviembre de 1931. Con anterioridad al diario católico se había referido al tema del divorcio "El Sol" al publicar un comentario de D. Miguel de UNAMUNO mucho antes de que la cuestión saltara a la palestra política y en el que el rector de la Universidad salmantina analizaba con su proverbial causticidad de lenguaje el tema divorcista, del cual opinaba que obedecía "Más que a ansias de los malmaridados, a una especie de sentimiento anticatólico o, si se quiere, anticlerical, respecto al matrimonio": no entraba, pues, en un tema que, como decía, no le afectaba- a analizar conceptos de libertad o atribución de poderes, pero parecía divertirse literariamente con el análisis de que, para uno, no tenía efecto la unión canónica, mientras que, para el otro, era irrelevante la civil y terminando con la conclusión sociológica de que este era tema que, como a él le sucedía, muy poco interesaba al pueblo llano donde la igualdad de hombres y mujeres era superior a la que se daba en otros niveles y haciendo una crítica implícita a las simples uniones de hecho: "El que se llama por antonomasia pueblo no se preocupa apenas del divorcio. Es problema que al verdadero proletario, al que tiene que cuidar de su prole, no se le suele presentar. Y es que en el proletario, en el obrero, la igualdad de los sexos es mayor, ténganse en cuenta las familias obreras, en que la mujer es más sosten de ellas que el marido. Hay obreros parados que comen a cuenta

1.3 El documento colectivo de 20 de diciembre de 1931.

Pese a la existencia de estas protestas la jerarquía eclesiástica permanecería publicamente en silencio hasta el 1 de enero de 1932, fecha en que publicó el documento colectivo de 20 de diciembre a que hemos aludido. Si bien este tenía por finalidad comunicar a los fieles la postura del episcopado sobre la reciente Constitución, la existencia del decreto de 3 de noviembre hizo que, al referirse al tema del matrimonio, comenzara aludiendo a él en forma expresa:

"Infausto para la juridicidad del Estado fue el decreto provisional con que se precipito la nueva legislación acerca del matrimonio, negando la potestad judicial de la Iglesia en las causas matrimoniales y suspendiendo los efectos civiles de las ejecutorias sobre el divorcio o nulidad de matrimonio emanadas de los tribunales eclesiásticos desde el advenimiento de la Republica. Incalificable atentado juridico, que solo una ofuscación sectaria pudo producir, porque no se puede obligar a comparecer en causa canonica ante el tribunal civil a quienes su confesion religiosa se lo veda de conciencia para tales causas; no es lícito dar efectos retroactivos obligatorios a leyes civiles posteriores sin exigencias indeclinables del bien publico, y no cabe sustraer los matrimonios contraidos canonicamente a la norma innegable de que tales contratos han de regirse perpetuamente por la ley que los regulaba cuando tuvieron efecto."

de la mujer y que, en vez de obreros en paro, son maridos en parada. Marido u hombre, ¡Es mi hombre! -bella expresion-. A la que responde: ¡Es mi mujer! "Mi mujer", y no mi esposa o mi señora, denominaciones pedantescas. Y pedantesca tambien "mi compañera", de los que quieren dar a entender que ni canonizaron ni civilizaron su matrimonio..." "Comentario.- Sobre el divorcio", "El Sol", 13 de junio de 1931.

Pero el documento colectivo era fundamentalmente un comentario a la nueva Constitución que acababa de ser promulgada y en la que se establecía expresamente la posibilidad de disolución del vínculo conyugal," por ello pasarían inmediatamente los obispos a efectuar una exposición destinada al poder civil plagada de tópicos y en la que la jerarquía expresaba claramente la baja opinión que tenía de la madurez de los españoles y del libre albedrío de las mujeres, a las que consideraba como seres perpetuamente necesitados de protección sin analizar seriamente la liberación que para muchas podría suponer la nueva legislación:

"Inseparable como es el contrato nupcial del sacramento en el matrimonio cristiano, toda pretensión del legislador a regir el mismo vínculo conyugal de los bautizados implica arrogarse el derecho de decidir si una cosa es sacramento, contraría la ordenación de Dios y constituye una inicua invasión en la soberanía espiritual de la Iglesia... La ley civil debe reconocer la validez o invalidez del matrimonio entre católicos, según la Iglesia la haya determinado, y las formalidades legales solo deben ordenarse a que sean atribuidos efectos civiles al matrimonio que "coram Ecclesia" sea debidamente celebrado... El matrimonio civil y la legislación divorcista laica es una concepción estatista del matrimonio, otro de los excesos de esa omnícompetencia del Estado, que tan funesta es para la libre expresión de la personalidad humana y la dignidad de las instituciones que no deben a él su existencia, ni sus fines, ni sus derechos.

«Frente a tales demasías, la Iglesia no cesará de reivindicar, en un país católico como el nuestro, el reconocimiento oficial de su competencia, el acuerdo de la legislación canónica y la civil y la supresión del divorcio, segura de que labora

(8) Recordemos que el artículo 43 de la Constitución, sobre la familia, decía en su párrafo primero: "La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos de ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa."

eficazmente por la salud misma de la Republica, librándola de la depravación de las costumbres públicas, impidiendo la innecesaria humillación de la mujer, víctima y exposita segura de tales viciosas emancipaciones, enrentando el culto de la carne, a que conduce la práctica fácil y el deseo morbido del divorcio, y ofreciéndole, en cambio, por el matrimonio cristiano, una raza de ciudadanos que, animados de sentimientos honestos y educados en el respeto y el amor de Dios, se consideren obligados a obedecer a los que justa y legítimamente imperan, a amar a sus prójimos y a respetar todo derecho de sus conciudadanos."

Tras estas desproporcionadas palabras en las que, como tantas veces, se identificaba la obediencia a la norma eclesiástica con la bondad en el orden civil, la jerarquía se dirigía a los fieles recordándoles (Capítulo IV, apartado 7) "la plena potestad de la Iglesia en el matrimonio de los bautizados, cuya celebración, legislación y jurisdicción a ella sola compete, sin merma ni dificultad de las atribuciones que en el orden estrictamente civil corresponden legítimamente al Estado."

Para los católicos, pues, el válido y legítimo matrimonio era sólo el canónico y éste era indisoluble, no pudiendo ser disuelto ni por el consentimiento de las partes, ni por autoridad meramente humana. Las causas matrimoniales entre bautizados

"...competen en derecho propio y exclusivo a la jurisdicción eclesiástica. No pueden, por tanto, los conyuges católicos, en conciencia, acogerse como actores a la ley del divorcio civil sin muy grave y urgente motivo, que debe ser previamente juzgado por el ordinario. La legislación del Estado en orden al matrimonio no puede tener aplicación a los católicos sin previo consentimiento de la Iglesia, o en conjunto o en

casos particulares; con mayor razón cuando en ella se establece el divorcio vincular."(9) y (10)

- (9) Declaración colectiva del episcopado español de 20 de diciembre de 1931. Ver el capítulo "La Constitución de 1931."
- (10) Como hemos indicado, muy pocos prelados hicieron observaciones de fondo al borrador de la declaración colectiva de 20 de diciembre de 1931. Entre ellos, ya lo hemos visto, estaba el cardenal de Sevilla, que si trató de cuestiones doctrinales. Entre sus observaciones una se refería, precisamente, al tema del matrimonio y, así, envió una carta al cardenal VIDAL el 19 de diciembre de 1931, una vez examinadas las pruebas de imprenta de la alocución, tratando de este último párrafo. En ella le indicaba que sería conveniente mayor precisión al hablar de la comparecencia de los católicos ante tribunales civiles en causas de divorcio, según éste fuera vincular o imperfecto y según existiera o no autorización de la Santa Sede. Dicha observación, al no existir una postura unívoca de la Sede Apostólica para todas las naciones en las que la autoridad civil legislaba y juzgaba sobre el divorcio, no se tuvo en cuenta, pero la carta del Dr. FLUNDRAIN dió lugar a que el párrafo fuera modificado sobre su versión primitiva, dando mayor claridad a las obligaciones de los fieles y a la intervención de la Iglesia. (*Esglesia i Estat durant la segona...* II, pp. 283-285).

No cabe duda que el arzobispo de Sevilla tenía singular interés por esta materia ya que, al insertar en el boletín de su archidiócesis el texto de la declaración colectiva del episcopado incluyó una serie de avisos para el clero relacionados con el matrimonio civil, dado que, decía, este empezaba a realizarse entre los católicos, debiendo, en consecuencia, ser instruidos acerca de la falta de validez de dicho contrato y de la sola legitimidad del matrimonio canónico. (2 de enero de 1932, "Avisos del Emmo. Prelado". BOE de Sevilla, año 75, 7 de enero de 1932, núm. 1197, págs. 3-5. Ver el apéndice núm. 2)

No fueron, no obstante, los obispos los únicos en ocuparse por estas fechas de la nueva legislación que la regulación constitucional propugnaba. si bien no nos consta que la reacción de los fieles católicos fuera en esta concreta materia relevante. Así, con independencia de las protestas genéricas sobre el proyecto de constitución o la Constitución misma ya examinadas en el capítulo correspondiente, tan sólo hemos encontrado un pronunciamiento sobre el tema y es el realizado por la "Asamblea Nacional de Padres de Familia" celebrada en Madrid los días 14 y 15 de noviembre. Aunque en ella se abordaron principalmente materias relativas a educación (ver la nota 95 del capítulo "La cuestión de la enseñanza"), figuraba entre sus acuerdos el siguiente: "La Asamblea protesta contra aquellos artículos de la Constitución que entronizan instituciones que, como el divorcio, son ineficaces para la inmensa mayoría de los matrimonios contraídos en el seno de la Iglesia católica y no pueden tener otro alcance que el desconocimiento de los efectos de estos y la apertura de una fuente más de disolución y de miseria, precisamente para los seres más débiles y necesitados de la sociedad." (s.f. "Acción Católica.- Asamblea Nacional de Padres de Familia", BOE de Grinuela, 1 de diciembre de 1931, núm. 21, págs. 382-384).

2. La ley del divorcio. Las exhortaciones de los obispos de Tuy, Orense y Tarazona (administrador apostólico de Tudela), condenando el matrimonio civil y el divorcio; la pastoral del arzobispo de Zaragoza.

Dictaminado por la Comisión de Justicia de las Cortes el 19 de enero de 1932 el proyecto presentado por Fernando DE LOS RÍOS el 4 de diciembre anterior, comenzó este a debatirse en su totalidad el 3 de febrero. Entre las peticiones elevadas a la Cámara para la pronta promulgación de la ley figuraban, al menos y que sepamos, la de la "Liga Internacional y Cruzada de Mujeres Españolas", que ya en septiembre había celebrado actos con intervención de diversas abogadas, para reivindicar el divorcio, y que había presentado su petición el 9 de octubre de 1931.⁽¹¹⁾ También figuraba la de un grupo de veintinueve mujeres que había solicitado su promulgación el 4 de agosto de 1931.⁽¹²⁾

En el comienzo del debate combatió la totalidad el sacerdote Santiago GUALLAR en nombre de la doctrina católica, mas fue rebatido en el sentido de que sobre la existencia o no del divorcio las Cortes ya no podían entrar, toda vez que el mismo estaba ya aprobado por el artículo 43 de la Constitución. El mismo día quedaba ultimado el debate a la totalidad, pero contra el proyecto se habían presentado más de sesenta votos particulares y numerosas enmiendas⁽¹³⁾ por los diputados católicos, si bien su mayor parte no fueron publicados en los apéndices del Diario de Sesiones. Con ellos pretendía la minoría católica que el

(11) "El Sol", 11 de septiembre de 1931.

(12) RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República Española*, Madrid 1969, pág. 258.

(13) "El Sol", 4 de febrero de 1932.

proyecto fuera modificado en tres sentidos: no retroactividad de la ley; que solo fuera aplicable a matrimonios no católicos y que fuera más restrictiva, esto último no ya por razones religiosas sino sociales.

El día 5 de febrero comenzaba la discusión al articulado en la que la minoría católica intentó, en principio, obstruir el debate, continuando con la sistemática presentación de votos y enmiendas; sin embargo esta actitud inicial decaería enseguida y la discusión parlamentaria continuaría sin apenas oposición hasta el día 25 en que, una vez discutido el proyecto artículo por artículo, se pasó a su votación definitiva.

De los 460 diputados, sólo votaron a favor 260 presentes en la Cámara en aquella sesión y 10 que se adhirieron más tarde; en contra lo hicieron 23 y un adherido. El sacerdote y deán de la catedral de Granada, LOPEZ DORIGA, suspendido "a divinis", miembro del partido radical-socialista, explicaría su voto favorable señalando que la familia "si cuando cumple sus fines naturales es la célula viva de la sociedad, cuando no los cumple es su mejor disolvente".⁽¹⁴⁾

(14) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, pág. 617, nota 1. No deja de ser destacable la actuación del sacerdote granadino en las Cortes. La causa de su suspensión a "divinis" por parte del obispo de Granada había sido consecuencia de la defensa efectuada por el del artículo tercero de la Constitución, toda vez que, según explicó, él entendía que la realidad social de España exigía "la neutralidad respetuosa del Estado en materia religiosa" ya que la sociedad española estaba constituida tanto por católicos como por otros ciudadanos que no lo eran. (Ver ARBELLOA, *La semana trágica de la iglesia en España*, págs. 248-249). La postura del sacerdote motivaría la inmediata protesta del cabildo catedral "en lo que toca a los altos intereses de la Religión", por lo que "en manera alguna" podían solidarizarse con su actitud (s.f., "Justa y loable protesta", BDE de Granada, año 86, 29 de octubre de 1931, núm. 3490, págs. 762-763). A esta protesta del cabildo catedralicio seguirían otras muchas, principalmente del clero granadino, que consideraba la actitud de LOPEZ DORIGA

La ley -con 69 artículos distribuidos en cinco capítulos relativos al divorcio y sus causas; al ejercicio de la acción de divorcio; a los efectos de este en cuanto a los cónyuges, hijos, bienes y alimentos; a la separación de bienes y de personas y al procedimiento-⁽¹⁵⁾ no solo no había sido modificada por los votos o enmiendas de los diputados católicos sino que en su artículo primero rechazaba explícitamente las intervenciones de estos que habían defendido la no retroactividad y la exclusiva aplicación de la norma a los matrimonios no religiosos: "El divorcio decretado por sentencia firme por los Tribunales civiles disuelve el matrimonio cualesquiera que hubieran sido la forma y fecha de su celebración". Tampoco la minoría católica había conseguido en los debates que se limitara la extensión de algunas disposiciones. Como señalan BATLLORI y ARBELLOA, tales debates, más que a una restricción, habían conducido a una ampliación.⁽¹⁶⁾

"lesiva a los derechos sagrados de la Iglesia y de escandalosa para el pueblo católico español", adhiriéndose, en consecuencia, a las penas canónicas impuestas. (s.f., "Variedades", BOE de Granada, año 86, 15 de noviembre de 1931, núm. 3491, págs. 774-777 y 30 de noviembre de 1931, núm. 3492, pág. 793). Dichas penas habían sido avisadas por el Dr. Lino RODRIGO RUESCA el 29 de octubre y, persistiendo el deán en su actitud, se hicieron firmes el 14 de noviembre (Ver el apéndice núm. 3), siendo ampliamente difundidas por la prensa.

Más graves serían, espero, las consecuencias de la actitud que el deán seguiría teniendo en las Cortes y, así, su defensa del divorcio le acarrearía nada menos que la pena de excomunión, según decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio de 27 de enero de 1933, decreto que, al igual que las reacciones que apoyaban la actitud mantenida por el sacerdote, merecieron también una amplia difusión en la prensa. ("EL Sol" y "El Debate", 1 de marzo de 1933.) Ver sobre este proceso y estas noticias el apéndice núm. 4.

(15) "Gaceta de Madrid", núm. 72, 12 de marzo de 1932. Ver el apéndice núm. 5.

(16) *Església i Estat durant la segona...* iI, pág. 522.

Quizá porque el 1 de enero ya había hecho sus advertencias al legislador y dado claramente sus normas al pueblo fiel, quizá porque en las fechas de los debates parlamentarios otro grave asunto -el del presupuesto del culto y clero- preocupaba a la jerarquía, lo cierto es que hasta el 6 de abril de 1932 no va a aparecer en la correspondencia que el primado de Farragón mantenía con el resto de los obispos y con el Vaticano ninguna alusión a la ley del divorcio. Ello no quiere decir que la actualidad del tema, que venía a incidir directamente sobre la conciencia católica del país, no preocupara al episcopado y así, en forma individual, no dejaría este de elevar su voz mientras en las Cortes se debatía el texto legal.

Entre los boletines consultados el primero que en 1932 se refirió a la cuestión del matrimonio fue el obispo de Tuy, Dr. Antonio GARCÍA y GARCÍA, que en la pastoral sobre la encíclica "Lux veritatis" suscrita el 10 de febrero de 1932, que era fundamentalmente un comentario de carácter religioso de dicha encíclica, aprovecharía tanto para hacer una protesta sobre la desaparición del crucifijo de las escuelas como para agregar un párrafo final, dirigido al clero de su diócesis, acerca del matrimonio. En él exhortaba a sus sacerdotes a recordar a los fieles "la doctrina cristiana acerca de la santidad e indisolubilidad del matrimonio", advirtiéndoles que "se corre el peligro gravísimo en nuestros días, de creer que las leyes humanas tienen fuerza para echar abajo las leyes de Dios, y hay que conjurar ese peligro."

(17) 10 de febrero de 1932, "Circular", BOE de Tuy, 73, 15 de febrero de 1932, núm. 3, págs. 59-63.

También el obispo de Orense, Dr. Florencio CERVINO GONZALEZ en su extensa pastoral del 12 de febrero, que contenia una profunda lamentacion sobre la situacion politico-religiosa de España, aludia al matrimonio atribuyendo la guerra dirigida contra él a obra de "impíos, masones y herejes" que conspiraban con los que legislaban, pretendiendo despojarla "...primeramente de su caracter sagrado de Sacramento haciendolo meramente civil, para que también de ese modo no tenga mas dignidad, indisolubilidad, ni derechos que los de un amancebamiento vulgar, recurso vil de la pasion inunda que a las mismas voluntades libres violenta y esclaviza."

Tras este duro párrafo continuaria aludiendo a los ataques que el laicismo asestaba, según su juicio, al matrimonio canonico, ataques entre los que situaba, con una actitud muy patriarcal y carente de toda caridad cristiana, la igualdad de los hijos en los derechos de herencia cualquiera que fuera su filiacion, insistiendo, además, y con singular desproporcion en el tema de la educacion, que, a tenor de sus palabras, el Estado guardaba para sí "para hacerla según su conveniencia- sustituyendo a los padres:

"...he ahí al cruel laicismo, hoy imperante, asestando al matrimonio canónico, divino Sacramento, a la faz de la iglesia, contraindo y sellado, esos tres golpes...: 1º. El divorcio, preferido y solicitado por cualquiera de los esposos y por jueces civiles decretado; 2º. La comun legitimidad de derechos de herencia, para toda clase de hijos, igual para los que no son como para los que son de matrimonio canonico, no perjudicandoles en nada, respecto de este particular, el ser adulterinos; 3º. La limitacion y aun negacion de la autoridad paterna para la educacion moral y religiosa de sus hijos, en oposicion o desacuerdo con la autoridad del Estado laico, quien considera a estos hijos, antes que miembros naturales de una familia que los padres en virtud de leyes anteriores y secretas energias de la misma naturaleza forman y presiden, pertenencia exclusiva suya respecto a educarles

según quiera y le convenga, o sea, inculcándoles obligatoria y preferentemente principios laicos emancipadores de toda sumisión y obediencia a potestad distinta -incluso la obediencia debida a los padres- y leyes ateas en las que no se admiten poder ni soberanía superiores a los del Estado".

A continuación, en una exaltación del catolicismo nacional recurría a la comparación, falta de todo rigor, entre los matrimonios europeos y los de España, donde nunca se había permitido el divorcio:

"...Y Estado hay en Europa, por lo visto, donde ya la mitad de los matrimonios contraidos acaban en divorcio. Dato desolador, verdaderamente tragico, sobre todo para una nación que como España, firme siempre y constante en su fe católica, jamás toleró el divorcio, considerandolo atentatorio al honor y prestigios de la patria, santidad de la familia y aun formalidad y nobleza de sentimientos".

Sin embargo, no dejaba el obispo de temer por la fortaleza de ese catolicismo español que acababa de exaltar. Este había decaído y, así, lejos de toda alusión al amor entre dos seres humanos, veía el posible naufragio de los matrimonios por el enriamiento de la tradición y la falta de sometimiento a los mandamientos, que podían ser conculcados por motivos casi incontesables:

"No se Nos oculta, no, queridos Hijos, que mucho han cambiado los tiempos y condiciones sociales de los hombres: No se aman como antes se amaban las tradiciones patrias; no se cumplen como antes se cumplían por encima de todo las leyes divinas, y nada mas fácil que dejarse caer en tentaciones diabólicas y aceptar halagos impíos".⁽¹⁸⁾

(18) 12 de febrero de 1932, "Carta Pastoral que el Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la diócesis dirige al Clero y fieles acerca del laicismo", BDE de Orense, año 33, 19 de febrero de 1932, núm. 2, págs. 9-50. Ver la pastoral íntegra en el apéndice "Los documentos de carácter genérico de la jerarquía en 1932".

No podía faltar en el tratamiento de las cuestiones del matrimonio civil y del divorcio la voz del obispo de Farazona, Dr. GOMA, que el 14 de febrero suscribió una también extensa pastoral monográfica, en esta ocasión llena de comedimiento respecto a su postura ante el poder civil aunque no, desde luego, a sus calificativos sobre posibles matrimonios civiles; pastoral en la que, con la exactitud de que gustaba, comenzaba aludiendo a los debates parlamentarios que en esas fechas estaban conduciendo a instaurar en España una forma de matrimonio contraria a los principios ordenados por la Iglesia, principios que tenían su base en la instauración divina del matrimonio, por lo que este "y el vínculo que de él resulta son indisolubles por derecho natural y por derecho divino".

No era objeto de su carta probar esta verdad, ya que consideraba que la fe del pueblo en ella lo hacía innecesario, pero si se proponía hacer "una reafirmación de la santidad divina del matrimonio y de su absoluta indisolubilidad en sentido negativo y por contraposición, refutando los errores de la ciencia y del derecho moderno sobre estos puntos."

Indicaba así que, contra lo sostenido por la Iglesia,

"... el derecho laizante, que ha incluido en casi todas las legislaciones del mundo, que va a entrar por la puerta grande de la Constitución novísima y de las leyes complementarias en la legislación patria, hace dos afirmaciones: la primera de ellas rotunda, absoluta, hostil a veces a la afirmación de la Iglesia: El matrimonio es contrato meramente civil en su esencia misma, y por la ley civil debe ser regulado, sin que el contrato sacramental celebrado ante la Iglesia tenga eficacia alguna en orden a las leyes del Estado". Esta afirmación se halla implícita en la Constitución española, artículo 12: "Corresponde al Estado español la legislación ... en cuanto a la forma de matrimonio..."

"Segunda afirmación: este contrato civil, por lo mismo que ha sido obra de la libertad de los pactantes, puede disolverse, como se disuelve una sociedad de cultura o una entidad mercantil, por un acto de libertad contrario al que lo constituyó."

Esta afirmación, que para el prelado era igual de rotunda que la anterior, por la naturaleza de la sociedad conyugal, "o por miedo al quebranto que en las costumbres y la sociedad misma podría producir, queda moderada y condicionada en la mayor parte de las legislaciones." También la Constitución española afirmaba la disolubilidad del matrimonio, pero el temor a los efectos de tal regulación aparecía en el proyecto del ministerio de Justicia y en las discusiones parlamentarias, y ello era porque "no puede tocarse una pieza viva del mecanismo social como es nuestro matrimonio tradicional sin la reverencia y el temor que inspiran una posible catástrofe social."

Por tal razón quería el dedicar esa pastoral de Cuaresma a hablar de las "dos grandes lacras"... de la civilización moderna": el matrimonio civil y el divorcio.

Respecto al matrimonio civil afirmaba GOMA que era esta una materia "gravísima, por el mismo momento político en que nos hallamos", toda vez que tenía la seguridad de que por la ley que se discutía en el Parlamento "se irá a la liquidación de la tradición cristianísima de España en este punto." Y ello porque a la posibilidad ya reconocida por el Código civil del matrimonio laico se añadía una regulación constitucional que lo reforzaba y, sobre todo, una transformación radical en las costumbres sociales, situación que describía con un reconocimiento del debilitamiento de las creencias religiosas en el pueblo

español -nuevamente considerado aquí por la Iglesia como un menor de edad sin criterio-, propiciado por la instauración de la República y los objetivos por esta perseguidos, hasta el punto de que, como ya había manifestado el arzobispo de Sevilla en su jurisdicción, se habían celebrado ya en esas diócesis ceremonias de carácter civil:

"Y es gravísimo, además, este negocio por el momento histórico en que nos hallamos y por la inquietud producida en el alma popular por el nuevo estado de cosas en España. Porque la firmeza y la densidad de la fe han decrecido en muchos; porque la acometida contra nuestras cosas ha sido brutal, así, sin atenuar un ápice de este ponderativo vulgar; y porque cunde la tesis de que esto de la Iglesia y de los curas se acaba, y de que todo ha de ser laico, y de que el matrimonio autorizado por el cura es superstición y monserga. Y como el pueblo es ignorante y simple; y como con ciertas doctrinas sociales y políticas sumamente simpáticas al vulgo, aunque irrealizables, se le ha metido el laicismo hasta el tuetano, y crea que definitivamente se van a cerrar los templos y se ha de acabar con el oficio del sacerdote, se empieza a desmoronar la vieja creencia sobre el matrimonio, y ya tenemos que lamentar desgraciadamente algunos matrimonios civiles entre nosotros."

A pesar de estas afirmaciones contraria, sin embargo, en la fe cristiana secular del pueblo, baluarte contra la desmoralización de la sociedad, que, caso contrario y de extenderse dichas prácticas, propiciaría la existencia de unos seres sin principios:

"Es cosa lamentabilísima, amados diocesanos, porque si el ejemplo cundiera, -que no será dado el arraigo de las tradiciones cristianas en este país,- veríamos bajar bruscamente el índice de la moralidad y asentarse las familias, base y seminario de la sociedad, sobre el rango vil de la mancebía, y nacer los hijos, si nacieran, en la atmósfera asfixiante de unos padres sin Dios y sin conciencia, que los echarían al mundo como el lobo a sus lobeznos. Porque de todos los animales el peor es el hombre, cuando voluntariamente y con contumacia ha arrojado a Dios de su corazón y de su hogar."

Fras esta introduccion pasaba el obispo a demostrar que el contrato matrimonial era cuestion de incumbencia eclesiastica, tal como habia sido instituido por Jesucristo, y glosado por San Pablo, razon por la que a la Iglesia competia exclusivamente su regulaci3n, segun el propio pontifice Pio XI acababa de reiterar. Ciertamente era, anadía, que en dicho contrato existian dos esferas, una intrínseca y otra accesoria. Venia representada la primera por la indole del contrato en si, tal como el mismo Dios lo habia querido configurar elevandolo a la dignidad de sacramento, era la segunda las derivaciones externas del contrato: dote, administraci3n de bienes, etc. Tales derivaciones podian ser reguladas por la sociedad civil, pero tal regulaci3n habia de hacerse siempre sobre la base religiosa del matrimonio, sin la cual no existía este como tal.

Basándose en palabras de la encíclica *Arcanum* de Leon XIII y de la *Casti Connubii* de Pio XI y remontándose hasta la narraci3n del Génesis, pasaba seguidamente el Dr. GOMÁ a exponer las razones que, a su juicio, demostraban que el matrimonio no podía ser una instituci3n laica; razones unas veces de carácter hist3rico, otras basadas en el hecho de la facultad procreadora de los c3nyuges y, sobre todo, en la instituci3n divina del sacramento en si. Por todo ello concluía exponiendo, en un oscuro parruto, la distancia que existia entre el contrato amparado por la bendici3n de la Iglesia y el regulado por la sociedad civil:

"Ya véis cuanto dista el matrimonio, dos veces santo, de este pretendido matrimonio civil que, como tal matrimonio, figura en las legislaciones modernas, que han querido suplantarlo a Dios por el Estado-dios. Desde este momento, el hombre —ni siquiera amparado en la soberanía del pueblo o en la supremacía del Estado, ni aun queriendo relegar la religi3n y sus cosas al fuero de la conciencia o al interior de los templos— no puede tocar este algo sagrado sin rebajarlo y mancharlo, haciendo de ello, puesto por Dios para la elevaci3n

sobrenatural de toda la humanidad, un instrumento de corrupción social."

Quería seguidamente el obispo exponer a sus fieles las consecuencias que se derivaban de cuanto acababa de decir a fin de, como decía, orientarlos en la práctica. Tales consecuencias eran:

Primera, que si el matrimonio era algo religioso por esencia lo era en todas partes, incluso "entre paganos", si bien, aunque el matrimonio entre gentiles fuera sagrado, no era un sacramento como el de los cristianos, de ahí que concluyera apuntando que "un matrimonio legalmente contraído por paganos es válido, mientras el de los cristianos contraído solamente por lo civil no llega siquiera a esta categoría", razón por la que el matrimonio civil representaba un indudable retroceso ante la ley cristiana.

Segunda, el matrimonio entre católicos -y ese era el caso general en España- era siempre sacramento, "no pudiendo haber matrimonio verdadero sin que, por el hecho de ser legítimo, sea también sacramento. Por lo mismo, el matrimonio civil entre católicos no es matrimonio, sino torpe concubinato."

Tercera, un católico podía apostatar de su religión antes o después de contraer matrimonio; si lo hacía con el fin de casarse por lo civil, su matrimonio no era tal, sino "contubernio villano", si su apostasía se producía después, no por ello se invalidaba el matrimonio, que continuaba siendo sacramento, siendo "adúlteros lo que apostaten ya casados para contraer el llamado matrimonio civil". La razón de todo ello se basaba en el carácter que condicionaba el matrimonio de los bautizados de forma que, o no contraían tal matrimonio o este debía ser, torzosamente, sacramento.

No quería el obispo que sus rieleles dejaran fuera de lugar estas admoniciones encaminadas a contrarrestar las costumbres que veía introducirse en las filas de los creyentes:

"El prestigio de la ley por una parte, y la escasa instrucción religiosa por otra, pudiesen persuadir a muchos incautos que un acto contractual celebrado ante el alcalde o el juez es equivalente al que hasta ahora ha tenido lugar ante la Iglesia. La idea laicisadora (sic) se abre paso; los malos ejemplos cunden rápidamente; la moda tiene muchos secuaces; y nos espanta la idea de que podáis acostumbraros sin repugnancia gravísima a estas aparatosas ceremonias con que en la esfera, hoy reducida, del laicismo naciente se celebra el 'registro civil', el 'entierro civil' o el mal llamado 'matrimonio civil' de algunos desgraciados cristianos."

Otra consecuencia ~~mas~~ del carácter sagrado del matrimonio quería recordar el Dr. GOMÁ a sus diocesanos: de tal carácter se derivaba que solo a la Iglesia correspondía su regulación y gobierno, tal como desde los tiempos primeros del cristianismo había venido haciendo. Según ello ¿cabía considerar que el Estado era un intruso cuando legislaba en esta materia?

Lo era si pretendía entrar en "el fondo intangible del matrimonio, su esencia y propiedad, en forma diversa o contraria a la Iglesia", era intruso si definía el matrimonio "como contrato meramente civil, o si lo declara disoluble, o si autorizara la poligamia". No lo era, sin embargo, sino que se movía en su propia jurisdicción, cuando regulaba las cuestiones accidentales derivadas del matrimonio y, aún más, cuando con sus leyes colaboraba con la regulación eclesiástica del contrato.

Finalizaba el prelado su exposición sobre la cuestión del matrimonio aclarando el caso de los Estados en que solo se reconociera -como amenazaba en España- la forma civil del matrimonio o el de los que dieran validez a una u otra forma de celebración, insistiendo en que si sólo se contraía el matrimonio ante el representante del Estado sin hacerlo ante la Iglesia "no hay matrimonio para los cristianos, sino simple concubinato." Ahora bien, concluía el obispo:

"... si los casados, a más de contraer ante la Iglesia acuden a la autoridad civil para cumplimiento de determinados requisitos, pueden hacerlo y será conveniente que lo hagan, si bien no tendrán valor alguno en orden a la validez del contrato, que será verdadero matrimonio, por ser contraído ante la Iglesia. Llenar los requisitos exigidos por la ley civil, podrá ser una necesidad para lograr la plenitud de los derechos civiles que puedan derivar del sacramento-contrato."

La doctrina eclesiástica, en fin, se reducía a la fórmula con que concluía: "El matrimonio civil, sin el matrimonio ante la Iglesia, no es matrimonio: es torpe concubinato."

Iniciaba seguidamente el obispo el tratamiento de la cuestión del divorcio, tema "candentísimo" por cuanto mientras escribía se discutía en el Parlamento esa "gravísima materia", que no era más que desarrollo legal de la previsión contenida en la Constitución y a la que, por no haber finalizado el debate, solo podía referirse aludiendo al proyecto presentado en la Cámara y por el cual se regulaban las causas, efectos y el hecho de la separación conyugal. El juicio del Dr. GOMA sobre el proyecto no podía ser, como era obvio desde el prisma eclesiástico, más contundente:

"... representa la laicización (sic) total de la materia matrimonial y que constituye un atentado, a lo menos por exclusión e invasión, ya que no por agresión manifiesta, contra el fuero sacramental

de la Iglesia y contra su potestad legislativa y judicial en este punto. Ninguna injuria hacemos a quienes parten de la base del completo laicismo estatal y de su omnipotencia, hasta en el recinto de la ley natural, hasta el recinto sagrado de lo que se acoto Dios para su religión."

Candente era el tema no solo por la actualidad de los debates sino tambien porque no ignoraba que muchos casados estaban esperando la aprobacion de la ley del divorcio como "liberacion del estado de violencia en que viven, la mayor parte de las veces por culpa propia." Lamentaba él estas situaciones, pero los catolicos debian recordar tanto la indisolubilidad de su union como la sola potestad eclesiastica para entender de ello:

"Pero la ley de la indisolubilidad es irreformable, porque la puso Dios; y por otra parte, sin atentar contra ella, la Iglesia, en virtud de los poderes recibidos de Dios, y como interprete del derecho natural y divino en materia de su competencia, ha proveido sabiamente para los casos de matrimonio desgraciado."

Por ello, al exponer la doctrina eclesiastica sobre el divorcio queria insistir no en "la inconciliable tesis de la indisolubilidad del matrimonio con su contraria, sino la firmeza de la indisolubilidad con la conveniencia circunstancial y esporadica de la separacion de los conyuges", premisa esta de la que el obispo partia como introduccion a su extensa exposicion sobre la materia.

Comenzaban asi sus palabras explicando que era, para la Iglesia, el divorcio, sobre el que existia tal confusion que esta habia tenido que sustituir tal expresion en el codigo canonico por la de "separacion". Asi cabia entender tal separacion o desunion entre conyuges en dos acepciones: O esta se referia al fondo esencial del matrimonio y entonces equivalia a la ruptura del contrato o lo hacia a su condicion externa, es decir, a la mera convivencia de los esposos, ya que la sociedad conyugal les obligaba a vivir

juntos perpetuamente. En el primer caso se estaba en presencia del divorcio propiamente dicho, o "perfecto", sobre el que se pretendía legislar en las Cortes; en el segundo se trataba del divorcio "imperfecto", basado en una separación, temporal o perpetua, de los esposos, que, sin embargo, seguían casados, toda vez que no implicaba la ruptura del lazo conyugal. La Constitución española introducía el primero y a él quería referirse especialmente, mas antes quería desarrollar qué se entendía por divorcio imperfecto y su posible legitimidad.

Pero previamente a esta exposición quería el prelado aludir a la realidad de la vida española, tal como la estaba viendo desarrollarse y que, para él, contrastaba, sobre todo en los centros urbanos, con lo que, según su consideración, era la virtuosa esencia del matrimonio cristiano:

"...hemos de lamentar que la relajación de costumbres haya llegado a tal extremo que muchos hogares, especialmente en las ciudades, donde tantos son los enemigos que acechan la paz y el bien vivir de los esposos, han dejado de ser la mansión de las virtudes clásicas en esta cristianísima tierra; el *mutuo amor en Cristo*, la abnegación, la tolerancia cristiana, verdadera obra de misericordia, la laboriosidad, la sobriedad, el cristiano arecto a todas las cosas de la casa, grandes y pequeñas, y, sobre todo, la práctica de la religión; y se han convertido en simples centros de convivencia donde se reúnen y conviven los cuerpos, alojándose cada día más los vínculos que unifican los espíritus."

Añadía el obispo que el matrimonio era sin duda una "pesadísima carga" ("no en vano -aclaraba- se la llamaba sociedad conyugal, es decir, sociedad de dos que están sometidos al yugo grave de las cargas anejas a ella"), de ahí que, en ocasiones, si los esposos no se apoyaban o rechazaban la gracia divina para encontrar la necesaria fortaleza, pudiera ser justificable una separación, cuestión

de la que el Dr. GOMA pasaba a hablar, apuntando incidentalmente las causas que podían propiciarla.

"Abandonados los conyuges a las fuerzas humanas, siempre flacas; ante la responsabilidad de sostener una familia y los trabajos que ello importa; en medio de las contradicciones de la vida,... entrentados tal vez dos temperamentos que no se conocieron sino el día siguiente al de bodas y que se consideran irreductibles a la unidad concorde de quienes deben ser un solo corazón y una sola alma; tal vez uno de ellos con una laceración física o moral que engendre repugnancia o encierre peligro para el otro conyuge; todo ello puede aliarse y conjurarse contra el pacífico convivir de los esposos que, o deberán resolver el gravísimo problema por medio de una separación, o se verán obligados a una vida de implacable lucha, de graves peligros para el cuerpo o para el alma, de escándalo y desconsideración social, de absoluta ineficacia en la obra de la formación de una familia cuyo anhelo les unió."

Estas circunstancias, continuaba el prelado, con frases llenas de comprensión, "que se multiplican y agrandan a medida que se conoce más el corazón del hombre, la tragedia de muchos hogares y los grandes adversarios que la vida moderna ha llevado a la estabilidad de los matrimonios", habían determinado la corriente favorable al divorcio que, "en forma más o menos atenuada" figuraba en la mayor parte de las legislaciones, "que han cometido atentado de lesa ley divina al reconocer y sancionar el divorcio perfecto como remedio a los males indicados."

Tales situaciones, sin embargo -quería dejar bien claro-, tenían su remedio, al que sólo se debía acudir como "recurso supremo", en la simple separación corporal de los esposos, toda vez que el vínculo era "irrompible por derecho natural y divino."

"Lo que pase de aquí es extralimitación de los poderes humanos por un doble concepto: por invadir una jurisdicción que no es suya, porque Dios la dió a la Iglesia, y por colaborar, aún a pretexto de fomentar la moralidad pública, a la desmoralización de la sociedad. Nada más demoledor que derribar las barreras que el mismo Dios ha puesto a lo que llamaríamos la continencia social."

Por ello puntualizaría el obispo, recordando palabras de la *Casti Connubii*, que a los católicos solo les estaba permitido, en casos extremos y bajo la jurisdicción eclesiástica hasta entonces reconocida por el Código civil español, la separación, sin posibilidad de contraer nuevas nupcias, ya que el vínculo matrimonial entre ellos tan solo se podría disolver con la muerte de uno de los dos. Con esta solución la Iglesia proveía a salvar las dificultades que pudieran oponerse a la indisolubilidad y "en el hecho de la vida, puede resolverse con ello todas las situaciones y dificultades que para los mismos conyuges, para sus hijos y para la sociedad pudiesen surgir de la desventurada convivencia de algunos matrimonios."

Recogida así la doctrina eclesiástica pasaba a tratar la cuestión del denominado "divorcio perfecto", cuestión que no dudaba en calificar como "uno de los hechos de mayor trascendencia en la legislación y en la vida moderna" y que, al tener ya respaldo legal en España, podía "alterar profundamente nuestra tradición y nuestras costumbres si, por ignorar la gravedad del error y del mal de esta institución laica, se dejaran sorprender los católicos en su buena fe, o creyeran que les es lícito todo lo puramente legal."

De ahí que el Dr. GOMA tuviera gran interés en desvirtuar tal posibilidad describiendo lo que él consideraba la realidad del divorcio, no solo desde el punto de vista eclesiástico sino también teniendo en cuenta su negativa

incidencia en la sociedad. Dado el contenido de estos párrafos, sustanciosos en el conjunto de la pastoral, los transcribimos con extensión:

"Hecho y doctrina la del divorcio vincular... que ha transformado casi todas las modernas sociedades, que es un interrogante y una amenaza suspendidos sobre la vida material de los pueblos y el camino que más ataja para llegar a las uniones libres y por ellas al amor libre, última etapa en los descensos de la dignidad humana. No será que se detenga la humanidad en el camino de su abyección por la fuerza de contención del divorcio, sino a pesar de él, por el instinto de conservación de las razas, que se aterran naturalmente a la indisolubilidad de la unión conyugal; y tal vez por la fuerza de la tradición secular del matrimonio cristiano, molde en el que se vacían en lo que tienen de aceptable, sin siquiera reconocerlo y advertirlo, las legislaciones divorcistas de los Estados modernos.

"Hecho terrible el del divorcio, porque es la garra implacable que destruye anualmente cerca de 40.000 familias en Francia; otro tanto en Alemania; 5.000 en Austria; 3.000 en Bélgica; 3.000 en Inglaterra; 50.000 en el Japon y la cuarta parte de la totalidad de los hogares en Rusia.

"Doctrina espantosa, por lo que se ha extendido, porque ya casi no queda pueblo que no reconozca el divorcio legal; y por lo que ha profundizado, porque cada día es mayor el boquete abierto contra la indisolubilidad, y porque va creciendo, a medida que crece la corrupción de costumbres, la facilidad de lograr el divorcio."

Así planteado el tema, en el que la Iglesia de la época, en lugar, como hemos visto, de analizar las causas que motivaban esa general aceptación de la que el obispo se quejaba, ligaba la implantación del divorcio a la "corrupción de costumbres", quería el Dr. GOMA tratar seguidamente de la posibilidad o no de la disolución del vínculo conyugal en alguna ocasión, para contestar inmediatamente que, en efecto, tal posibilidad existía, aunque fuera rarísima y exponer los

casos de disolución aceptados por la Iglesia: matrimonio entre no bautizados y en el que, posteriormente, uno de los conyuges se convirtiera y no quisiera seguir conviviendo con el otro; matrimonio no consumado, mediante dispensa pontificia con justa causa, o por profesión religiosa de uno de los conyuges.

Fuera de estas excepciones, "Más que raras, rarisimas, el matrimonio de los bautizados, cuando se ha puesto el acto conyugal, y esta es la inmensa mayoría de los casos en nuestro país, jamás podrá disolverse."

Tal postura era la mantenida siempre por la Iglesia y la que siempre mantendría en contra de lo que sostenían sus enemigos, "protestantes, masones, naturalistas y laicistas de toda laya."

Y ahora en España iban a aceptarse estas posturas introduciéndose el divorcio, lo que podía ser, para el prelado, nada menos que causa del fin de "las grandes virtudes de una raza".

"...se estatuyen en el proyecto de ley que se discute nada menos que doce causas de divorcio vincular;⁽²⁰⁾ y sin atender al inmenso peso de una tradición secular; sin que hasta ahora se haya oído el clamor de nuestro pueblo que quisiera hacer almoneda de la santidad de nuestro matrimonio indisoluble, como tal admitido por todos, casi sin excepción; con preterición total del fuero eclesiástico y con formal oposición a la ley divina, va a implantarse el divorcio legal.

(20) Recordamos que el sistema establecido por la ley del divorcio fue, con carácter general, el de culpabilidad, es decir la necesidad de alegación de causa por parte de cualquiera de los conyuges para entablar el proceso, a no ser que existiera autuo acuerdo o en el caso de enajenación mental y se daba en el tratamiento igual al hombre que a la mujer (En el proyecto de constitución se había llegado a plantear, para favorecer la parte generalmente más débil de la pareja, que no hubiera necesidad de alegación de causa por parte de la mujer, pero tal planteamiento no prosperó). En el texto definitivo se recogieron trece causas que posibilitaban el proceso de divorcio. (ver el apéndice núm. 5)

«Con todos los respetos debidos al legislador decimos que esto es un salto en el vacío, y que el vacío es aquí el abismo en que a la larga pueden desaparecer las grandes virtudes de una raza que las tuvo precisamente por haber salido del tronco del matrimonio cristiano, indisoluble y único, arraigado en el corazón de Cristo y vivificado por su sangre redentora.»

El divorcio, en suma, entrañaba -en tópicos conceptos- el fin de "la dignificación de la mujer", la debilitación de la raza, era el hundimiento de la familia y, en fin, la desaparición del verdadero amor entre todos sus miembros, males que solo podían evitarse siguiendo la doctrina y los principios determinados por la Iglesia:

"... con la Iglesia vamos a labrar y robustecer la felicidad de la familia, a la dignificación de la mujer, al levantamiento de la raza, a la sublimación del amor conyugal. Fuera de la Iglesia y contra la Iglesia, se va a la relajación de la vida doméstica, al abandono de los pobres hijos, a la descotización social del sagrado matrimonio, al bochorno de las uniones libres, al capricho del amor liviano, a aventar, en fin, el tesoro más precioso que ha puesto Dios en el mundo, después de su amor y de su gracia: el amor de esposos, de padres y de hermanos, rompiendo el ara santa de la familia cristiana, de cuyo altar se difunde por la tierra la quintaesencia de los más puros afectos y de los sacrificios más fecundos."

Así sentadas estas rotundas afirmaciones quería el Dr. GOMA analizar lo que denominaba "Las falsas razones del divorcio", que no eran otras, insistía, que "un estado social de relajación de costumbres", derivada "de la relajación moral que las informa". Mas, frente a ello, había que recordar que "Las normas inmutables de la humana vida", por Dios establecidas, no podían estar sometidas a "las veleidades del legislador humano ni a las variaciones de las costumbres y del criterio social que las modera." Y ¿de dónde derivaba ese cambio de costumbres?: El prelado insistiría en sus ideas: todo era producto de una pendiente de inmoralidad

social, que describía con la tradicional desconfianza eclesiástica en el ser humano:

"El divorcio legal, que ha desatado sobre la tierra la gran injusticia del adulterio legalizado, no tiene en su favor razones valederas de razón. Todas ellas, cualquiera que sea su apariencia se reducen a una sola: la corrupción de las costumbres públicas... Es ley fatal que, cuando los pueblos se enlodan chapuzando en los barrizales de la lujuria, van derechos a romper el vínculo conyugal: es la bestia humana, que no sufre el yugo de leyes que sojuzguen sus malos instintos..."

Bien sabía el que fuera de esta única razón se alegaban socialmente otras, razones que, cual la inocencia de uno de los conyuges y la culpabilidad del otro, habían sido citadas por Pio XI en la *Casti Connubii*, mas si tales razones pasaban a considerarse, tendrían como consecuencia -en una postura del Dr. GOMA demasiado simplista y exagerada- el fomento tanto del crimen como de las bajas pasiones por parte de uno o de los dos conyuges, con la esperanza de lograr el divorcio:

"Si el adulterio, el abandono del conyuge, el desamparo de la familia y otras causas que se señalan en las diversas legislaciones son bastantes para romper el lazo conyugal, es fácil la ruptura, poniendo cualquier causa de ella, tanto más cuanto mayor pueda ser la proclividad del conyuge a ciertas causas."

Frente a los problemas de convivencia que de un mal matrimonio podían derivarse y en el interés de favorecer al conyuge inocente, "el bien social representado por la indisolubilidad supera en mucho al bien individual de quien convive mal con su consorte". Además, existía también la simple separación, de la que ya había tratado, fuera temporal o perpetua, para "remedio de todos los males que pueden pesar sobre los esposos desgraciados."

Otra causa que se alegaba, también recogida por Pío XI, era el bien de los hijos que sufrirían las consecuencias de las discordias de los padres. Frente a ello entendía el prelado que mayor dolor era destruir el hogar familiar, ya que los hijos eran siempre las víctimas de los divorcios, pues, en todo caso, siempre crecerían "como forasteros en casa ajena, que matara en ellos su amor al hogar y les empujara a una vida de aventuras, tal vez de crímenes."

Otra razón que los partidarios del divorcio sostenían era que con él se conseguía un bien social, ya que, como Pío XI recogía, defendían que la libertad para contraer nuevas nupcias acarrearía mayor felicidad y daría a la sociedad los frutos de los hijos, mientras que, además y por contra, si no se rompía el vínculo de esposos que habían incurrido en crimen, se multiplicarían los delitos por la persistencia de la ocasión y contra ello nada podrían las leyes y los tribunales.

Contra estas razones, así descritas en el documento pontificio, tenía el prelado una postura muy clara: Sobre la primera sentaba que "a un mal que no lo es sino en sentido negativo y que es de pocos, no hay que buscarle el remedio en el mal general del divorcio, verdadera plaga de las sociedades que lo admitieron." Sobre la segunda fiaba en la dureza de las leyes humanas para corregir a los culpables: "para las voluntades perversas, para los reincidentes, las leyes tienen sanciones especiales, y que no hay que hacer leyes nuevas que habrán de ser cebo para crímenes mayores."

Otra razón había que el prelado también quería refutar: entendían muchos que si el matrimonio había sido contraído libremente, también libremente había de poder disolverse; mas esto no era así por la índole misma del contrato, que si había sido aceptado libremente -pues si no no existiría- tal aceptación lo había sido de todas sus características, las

cuales eran esenciales al tipo de contrato celebrado y no dependían de la voluntad de los contrayentes.

Había aún otros que creían que el divorcio era exigencia de los tiempos modernos. "No, -decía el obispo- que es un retroceso a la barbarie", contundente frase que desarrollaba con tintes tremendistas y no demasiado acertados desde el punto de vista histórico:

"La ola de cieno que sobre los pueblos desató siempre la prodigalidad de los divorcios acaba fatalmente o arrasandolos o llamando tras sí otra ola de sangre que los purifique. Esta es la historia. Por ello las naciones más progresivas, la vieja Prusia entre ellas, han retrocedido cohibiendo la liviandad divorcista. Rusia la soviética, la del amor libre, o a lo menos la de las uniones libres, se debate en las convulsiones de una barbarie jamás vista."

Una última razón quería refutar el prelado para terminar con esta exposición y era aquella que afirmaba que el divorcio favorecía la natalidad. Frente a ello ponía el ejemplo de Francia, "que con más de 30.000 divorcios anuales pierde, también anualmente, más de 20.000 de sus hijos". A ello añadía que sería fácil realizar una estadística que demostrara que los divorcios y la natalidad iban en progresión inversa.

Según todo lo apuntado sus conclusiones eran claras: no había razón alguna que abonara el divorcio, "no hay más razón que la del desenfreno de la libertad."

Mas si aun a los católicos les estuvieran ocultadas las razones de Dios para fijar la indisolubilidad del matrimonio, "expresión y refrendo en este caso de la ley natural", estaba la razón suprema de ser esa la divina voluntad, "por sobre las conveniencias circunstanciales, que no son más que el

tapujo que cubra la miseria personal; por sobre los decretos de los legisladores de la tierra..."

Así expuestas las razones que muchos arguían para defender el divorcio, y, a su juicio, refutadas una por una, quería pasar seguidamente a exponer las que, aparte de la fundamental de la revelación divina, se esgrimían en forma contraria al divorcio, basadas, según la doctrina eclesiástica, en consideraciones de orden natural.

Se fundaba la primera en ser el matrimonio fusión de espíritus y vidas basada en el amor total, siendo, por tanto, "el peso de toda la vida" y así había sido entendido por muchas civilizaciones, que en casos -aunque ello fuera una "aberración"- habían llegado a prohibir las segundas nupcias. De ahí que el divorcio fuera "antinatural", poder "de la pasión, de la conveniencia o del capricho". Los católicos no podían creer en ese "poder del desamor, del egoísmo, del odio si quereis, para deshacer lo que el amor junto", ya que "del corazón roto de dos esposos [no] podrá labrarse otro corazón para otro esposo."

"Destrozar espiritualmente un matrimonio es una gran desgracia; empeñarse en hacer otro, imposible; lo que se haga no será obra de la naturaleza ni de Dios, sino obra monstruosa del hombre."

Y ello porque si algún amor había de ser perdurable, -añadía el Dr. GOMA con unas consideraciones que volvían a ser a todas luces exageradas- este era el de los esposos, que, al ser así perpetuo, importaba "la máxima generosidad, hasta la total entrega mutua de los cónyuges; y la máxima intimidad y libertad, con el derecho máximo a la intervención absoluta en los afectos del otro esposo." Contra ello los divorciados serían "dos seres antagonicos que, no habiendo sentido el pudor de inirringir unos pactos sagrados, menos lo

tendran de entregar a la publica voracidad lo que debio quedar en el coto cerrado de la vida conyugal."

Los cristianos tenian, ademas, otra poderosa razon cual era, citando a San Pablo, la consideracion del matrimonio como simbolo de la union perpetua de Cristo y la iglesia, y, asi, "¿con que derecho podria una ley humana de divorcio destruir en el matrimonio cristiano esta marca con que el mismo Hijo de Dios le sello?".

Contra el divorcio, en fin, estaban toda la serie de razones apuntadas en la *Castii Connubii* y que el obispo desarrollaba con su personal apreciacion y estilo, en casos muy alejados y poco comprensivos de la realidad de muchas situaciones matrimoniales y personales:

"Contra el divorcio vale la razon de estos hogares deshechos, de los que se ha evaporado la mas fina esencia de la vida humana, que es el amor, y se ha destruido el instrumento mas perfecto de formacion de los pueblos que es la accion educadora de los padres, cuyo trabajo mancomunado, sincronico, llevado hasta la abnegacion, es necesario, por ley de naturaleza, para la buena formacion de los hijos.

«Vale el clamor y las lagrimas de los hijos, que podran verse en manos mercenarias cuando mas necesitaban el amparo del padre y las caricias del amor insustituible de la madre; que, tal vez por ello, aprenderan a ser desalmados, porque tuvieron la desgracia de tener padres sin alma; sin alma para suirse mutuamente; sin alma, porque rompieron lo sagrado de los pactos; sin alma, porque no la tuvieron para llorar la desgracia y el desamparo de sus hijos.

«Vale este enjambre de vidas errantes, que corren a la ventura de todo viento en busca de nuevos amores y se apacientan en los prados de toda lujuria; vidas dos veces esteriles, porque se desarraigaron de su hogar y porque llevaron a otro el corazon tronchado en la lucha por deshacerse de los lazos antiguos, del conyuge amado otros

tiempos y de los hijos que llevarán siempre entrñados en su corazon.

«Vale la desdicha de la mujer, primera victima del divorcio, que ha dejado en el primer hogar lo que vale mas para ella, las primicias de su honor, la reputacion social, los atractivos de su juventud.

«Y vale lo que no tiene precio, porque es el mas alto valor humano, el amor que, como dice el Sabio, vale mas que todo el oro, que tiene por equivalente unico el valor de la misma vida y que el divorcio rebaja y desperdicia, rompiendo el vaso que lo contiene en su mas pura esencia, el corazon de los esposos, el de los padres y el de los hijos.»

Para finalizar su extensa pastoral y antes de concluir haciendo sus exhortaciones concretas a los casados, queria el prelado imbuir a los catolicos de la forma en que habian de luchar contra el divorcio: "resistir". Resistir contra la ley, si es que acaso esta les impusiera el divorcio, mas esto no lo haria la nueva norma, lo autorizaria "en determinados casos y condiciones, lo permitira; señalara las causas que puedan legitimario, regulara sus tramites, ordenara los efectos." Y por ello, al referirse a esta nueva regulacion no podia menos que expresar su parecer contra la misma y contra la labor de las Cortes, con una consideracion en sus expresiones hacia ellas que no le hemos visto tener en otras ocasiones:

"Digamos de paso, con todo el respeto debido a una ley que todavia no esta en vigor, y con el mayor que debemos a una asamblea legislativa, que la ley complementaria del articulo 43 de la Constitución relativa al divorcio, si hemos de dar credito a las referencias de prensa, abrira un boquete enorme, por donde puedan hallar salida muchisimos casados que se avengan mal con su conyuge y con la ley cristiana de la indisolubilidad. Sera de las legislaciones mas avanzadas en este punto, y decir mas avanzadas es decir mas demoledoras del matrimonio. Nos referimos a la hipotesis de que la ley corresponda a lo que de publico se dice."

Por ello se atrevía a decir -justificando en cierta forma el fin de la norma que se debatía- que si él pudiera aconsejar al legislador, al tratarse de "una ley de excepción", de la que no se había hecho todavía "ensayo alguno", debería esta ser "en alto grado restrictiva y favorable a la institución que trata de proteger". A pesar de ello no dejaba de reiterar, desde luego, la indisolubilidad del matrimonio, la afirmación de que la simple separación conyugal era suficiente para resolver las mas graves desavenencias y "la incompetencia del poder civil para legislar sobre la esencia del matrimonio."

Aconsejaba a sus fieles no la resistencia directa a una ley permisiva, "pero si trabajar por las vías legales para que se derogue, y mas aun para que no prevalezca la practica antisocial del divorcio; y esto con la convicción y tenacidad de quien hace labor cristiana y patriótica."

Abundando en esta idea y pensando en lo que entendía como suirrimiento futuro de muchos niños, insistía el obispo en la capacidad de influencia de los católicos ante la nueva ley, dentro, eso si y en esta ocasión, del juego democrático:

"...¿por que no podríamos nosotros anticiparnos a ellos (los niños) y, dentro de la legalidad mas absoluta, en estos tiempos de sufragio universal y de soberanía popular, ensayar, sino un *referendum*²¹ que la ley nos veda en este punto, otro medio para la defensa del hogar español puesto en peligro? ¿No se reconoce al pueblo el derecho de iniciativa legal en la misma Constitución?"

(21) En bastardilla en el original.

Era el prelado consciente, no obstante, de lo difícil que era pedir tal actitud ante una ley que no imponía obligación alguna al pueblo fiel, que era simplemente permisiva, y, de ahí que bajara un punto sus pretensiones pidiendo, al menos, que los creyentes, si no actuaban como hipotéticamente había aconsejado, difundieran la doctrina católica sobre la cuestión:

"...resistir... con la difusión de la buena doctrina, cultivando con mayor esmero las virtudes conyugales, utilizando nuestra influencia en la pacificación de matrimonios mal avenidos, divulgando las funestas consecuencias del divorcio y explicando las grandezas y ventajas del matrimonio cristiano, esencialmente indisoluble."

Daba el este consejo porque, en lo que no era más que una extensa reiteración de lo ya explicado, consideraba el divorcio "como ariete demoledor de los sillares en que se asienta la grandeza de los pueblos". El primero de los valores sociales era, según él, la familia, "por ella -llegaba a decir- no por los individuos, son los pueblos fuertes", ya que el individuo era el resultado de lo que de él hacía la familia. Ella era "la célula de la sociedad" y, por eso, "debilitaría es poner en riesgo su vigor." y a ello contribuiría una ley que facilitara el divorcio, "hijo y padre a la vez de todos los egoísmos de este pequeño mundo que es la casa." Era el divorcio, insistía, un mal para la educación y desarrollo de los hijos, pero, además -con patriarcal concepto y en contra de esas solicitudes de mujeres que hemos visto pedían ante las Cortes la pronta aprobación de la ley-, el divorcio, insistía, era una ruina para la mujer, según señalaba en un párrafo que, desde el prisma actual, no puede ser más revelador de la actitud tradicional de la Iglesia y que por ello no nos privamos de reproducir:

"Después de los hijos, la mujer es la que más pierde en el divorcio. Con razón se ha dicho que cuando esta institución legal no tuviera otro

motivo de repulsa, sería execrable por el solo hecho de haber ocasionado mil veces la ruina del honor y de la grandeza de la mujer, tal como la habían hecho los siglos cristianos. Se dice en la ley que el matrimonio se funda en la igualdad de derechos, y por lo mismo también el divorcio. ¡Pobre derecho de la mujer ante la fuerza del hombre, que empieza por hacer la ley a su gusto y que, con la ley, fuera o contra de ella, tendrá mil recursos para triunfar de la mujer! Para su debilidad no hay más protección que las delicadas virtudes y las inexcusables exigencias del matrimonio cristiano; ¡y el divorcio es la reversion a la paganización del matrimonio, con la humillante servidumbre a que sometió a la pobre mujer!."

Claro que, además, el divorcio, volvía a decir, era la vía más rápida para corromper a la sociedad misma, puesto que acarrearía "la ruina política o moral de un pueblo", de ahí que la sociedad que lo admitiera "llevará en su pecado la penitencia", ya que

"Los males sociales no se curan poniéndoles las débiles compuertas de una ley tolerante y reguladora, si al mismo tiempo no se ciegan las fuentes de donde provienen..."

"Esto es el divorcio: un río que se desborda y cubre de cieno a la sociedad..."

"El divorcio es el plano inclinado que conduce a la barbarie del amor libre..."

"Esto es el divorcio: un retroceso en la marcha ascensional de los pueblos, un triunfo de la carne sobre el espíritu, la paganización de la sociedad cristiana."

Era, pues, y para acabar -insistía el obispo, en una reiteración que parece se resistía a la finalización de una carta pastoral que giraba y giraba sobre los mismos argumentos- la misma civilización cristiana la que se ponía en peligro con la novedad que la ley quería amparar, toda vez que, -y aquí introducía una novedad difícilmente asumible para un siglo de los años treinta- era precisamente la

castidad "el nervio y la gloria de los pueblos que la cultivan".

"Porque en definitiva, amados diocesanos, y esta consideración no debe escaparos, es la misma civilización cristiana la que se pone en peligro con el divorcio. La indisolubilidad del matrimonio es uno de los pilares sobre que se asienta nuestra civilización. Es la Iglesia la que ha rido de la ciudad la vergüenza de las uniones libres, trabajando para que la castidad y la continencia tuvieran virtudes sociales y salvaguardándolas con la institución del matrimonio único e irrompible. Si la castidad no es una virtud hipócrita, como alguien ha dicho recientemente, sino el nervio y la gloria de los pueblos que la cultivan. El matrimonio indisoluble, sellado con la sangre de Cristo, que ha hecho de él un sacramento, ha sido durante veinte siglos uno de los grandes factores del levantamiento social obrado por el cristianismo. Como las ideas de igualdad esencial, de libertad personal, de fraternidad universal, de misericordia, de redención, en el mismo nivel de influencia restauradora, con eficacia mayor, porque se aplica a la entraña misma de la sociedad, que es la familia. Cuando decaen las costumbres cristianas, aparece otra vez el divorcio, que a su vez es causa de mayor ruina de las costumbres."

Hoy, además, el divorcio una brecha que se agrandaría, no solo por el incontenible aumento en los límites legales, tal como ha sucedido en los países occidentales, sino porque "la corrupción creciente obligará a la ley a hacer nuevas concesiones al desenfreno social", de lo cual era paradigmático ejemplo la situación rusa, donde el divorcio podía fundarse tanto "en el mutuo consentimiento como en el simple deseo de uno de los esposos", que así podía manifestarlo simplemente ante el registro civil, de lo que había resultado un "libertinaje de las ciudades", del que consignaba como ejemplo Leningrado, donde "en 1927, sobre 24.000 matrimonios registrados ha habido mas de 15.000 divorcios."

Finalizaba el Dr. GOMA esta pastoral haciendo, como hemos indicado, unas exhortaciones a los casados. Exhortaciones que comenzaban reiterando esa idea de "raza" que hemos visto expuesta y exaltando los tradicionales valores españoles refugiados en el seno doméstico:

"Que aparte Dios de nuestra querida España el azote del divorcio vincular. Tal vez no hay actualmente en el mundo país alguno donde inspire mas respeto la santidad del matrimonio y en que tenga mas cohesión la familia. En la casa española se han refugiado las virtudes de la raza, y en ella estas las definitivas reservas de nuestro resurgimiento. No dejemos que la ley del divorcio toque nada de este resorte vivo de nuestra grandeza nacional."

Ni la Constitución ni la nueva ley daban las razones de la conveniencia del divorcio. No dudaba "que el legislador intenta poner un remedio al mal de desavenencia que puedan sufrir algunos matrimonios", mas el remedio que se daba no se imponía a los matrimonios católicos que, en consecuencia, no debían de tomarlos, pues no solo les dañaría a ellos sino también a la sociedad. Utopicamente esperaba que los mismos legisladores estarían contentos si la nueva norma no se aplicaba ni en un solo caso, pues ello sería "la prueba mas palpable de la felicidad de las familias y de la integridad moral de la nación, objetivo de todo gobernante. Entonces la ley quedaría automáticamente eliminada de nuestros códigos, por el sufragio universal del sentido moral que la haría inútil."

Para ello aconsejaba el prelado, dando, en realidad, un paso en la forma de concertación de los matrimonios tradicionales, tantas veces bendecidos por la Iglesia, que se evitara todo "factor bastardo que pudiera comprometer la estabilidad del enlace, la pasión, el interés, la conveniencia, la voluntad ajena en perjuicio de la propia libertad"; que se pusieran "las debidas garantías de acierto que exige la misma prudencia natural" en la celebración de

los matrimonios y que estos se sostuvieran luego bajo las virtudes cristianas y las normas de la Iglesia, debiendo los esposos tolerarse y amarse en caridad bajo la idea de su lazo perpetuo.

Si así actuaban, la ley, insistía, sería inútil, ya que los hogares serían -en hermosas e idílicas ideas- dichosos y formarían "la patria chica, los pueblos y ciudades felices... Porque la paz conyugal, hija de la unión inviolable de los esposos, es la piedra angular de la prosperidad de los pueblos."'''

Diametralmente opuesta al tono y extensión de esta pastoral y, sobre todo, al contenido de la del Dr. CERVINO, sería la escrita por el arzobispo de Zaragoza, Rigoberto DOMANECH VALLS, el día 20 de febrero, también con motivo de la Cuaresma. En ella aludía a la secularización del matrimonio con palabras que, lejos de calificar lo que para la Iglesia no dejaban de ser, como hasta aquí vamos viendo, uniones de hecho como fruto de las más bajas pasiones, se limitaba a informar a los católicos de las distintas consecuencias del matrimonio civil y canónico, aconsejando, además, la posterior celebración de aquel, cuestión esta en la que los prelados hasta aquí vistos no habían entrado en sus respectivos escritos:

"Importa mucho advertir a nuestros diocesanos para que no sorprendan su buena fe o la ignorancia de algunos en estas materias: 1º que el llamado matrimonio puramente civil es nulo, porque entre cristianos la unión conyugal o es sacramento cuando se celebra en la forma prescrita por la Iglesia, o es invalido el contrato si se excluye

(22) 14 de febrero de 1932, "Carta Pastoral de Santa Cuaresma". BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 15 de febrero de 1932, num. 701, págs. 89-143.

el Sacramento. A los padres, a las madres cristianas y a los jóvenes hay que recordarles las consecuencias a que se exponen, explicándoles de paso que ese matrimonio no es indisoluble ni perpetuo. Por lo demás, a nadie se le oculta que, celebrado el matrimonio canónico, conviene añadir a este acto el cumplimiento de las formalidades prescritas por el Estado a fin de que el casamiento surta efectos civiles. 2º Exige igualmente el bien de las almas que se de la voz de alerta a los fieles poco avisados a quienes seduzca la perspectiva de un divorcio vincular. Haganles saber los Párrocos y Sacerdotes que el matrimonio canónico es indisoluble por derecho natural y por ley de Cristo y, aun cuando obtuviesen en el orden civil sentencia de disolución del vínculo, ante Dios, ante la Iglesia y ante su conciencia el vínculo subsistiría y las nuevas nupcias que intentasen contraer serían nulas... "(23)

2.1. La pastoral del Dr. PÉREZ PLATERO, obispo de Segovia.

Pero junto a la ponderación del arzobispo de Zaragoza iba a alzarse la voz del obispo de Segovia, Dr. Luciano PÉREZ PLATERO, (24) con una pastoral que, fechada el 30 de marzo

(23) 20 de febrero de 1932, "Instrucción pastoral con motivo de la Cuaresma", BDE de Zaragoza, año 71, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 85-96.

(24) Creemos conveniente recordar aquí que el Dr. PÉREZ PLATERO era uno de los miembros más jóvenes del episcopado español, tanto por la edad -sólo contaba 49 años en 1931- como por su permanencia en el episcopado, -había sido preconizado en 1929- dejando en esa fecha, precisamente, su cargo de Auditor del Supremo Tribunal de la Rota de la Nunciatura para el que había sido nombrado en 1926.

de 1932, es decir, cuando ya estaba en vigor la ley del divorcio y aun distaba mucho de ser presentado a las Cortes el proyecto de ley sobre matrimonio civil, iba a conmover la situación político-religiosa del país. Esta pastoral sería la causa de que el gobierno le privara, en junio de aquel año, de sus temporalidades, siendo así este obispo, y por este motivo, uno mas de los prelados que sufrirían sanciones del poder civil durante el primer bienio republicano. Dedicada íntegramente al tema del matrimonio comenzaba la pastoral refiriéndose a la actuación del gobierno y de las Cortes en términos de gran dureza no utilizados hasta ese momento por ningún otro miembro de la jerarquía:

"Tan irritantes son los atropellos y tan múltiples y desembozados los ataques, que en pocos meses se han dirigido, desde las alturas del poder público y desde el alcazar soberano del Parlamento, contra la conciencia católica del país y contra los mas sagrados intereses de la religion y de la Iglesia, que, arligido y conturbado el ánimo a la vista de tanta saña e iniquidad, no podemos sotocar en la garganta la voz de encendida protesta por tan notorios desahueros y sacrilegos agravios..."

Uno de ellos era el del matrimonio que

"...por virtud de la Ley del divorcio quedará profanado en su santidad, y rebajado al nivel bochonroso de función meramente reproductiva de la especie."

Frente a esta situación, así descrita según el parecer del prelado, recordaba que en todas las naciones, a través de la historia, el matrimonio había sido revestido de dignidad y carácter sagrado, el cual se acentuaba al ser convertido en sacramento por Jesucristo, lo que hacía que la Iglesia pasara a ser la única detentadora de competencias sobre el mismo:

"Consecuencia inmediata e irrecusable de la elevación del matrimonio a la categoría de sacramento es la regulación exclusiva del mismo

por la autoridad eclesiástica, sin que ningún poder de la tierra pueda someterlo a su competencia, y mucho menos legislar sobre sus elementos constitutivos, sobre su íntima naturaleza y esenciales propiedades."

En contraposición a tal competencia se venía a reconocer ahora el matrimonio civil, cuya celebración pasaba a descalificar comparándola con la religiosa y describiéndola con singular crudeza:

"Y ved ahí que entramos de lleno en lo que llaman, con estrafalario y feo nombre, *matrimonio civil*,⁽²⁵⁾

...

«Es el matrimonio celebrado a espaldas de la Iglesia, sin la presencia de sacerdote alguno que haga sus veces, y con la sola intervención y el sólo pasaporte o visto bueno de un funcionario del Estado, instituido y ungido, pero sin óleo ni crisma, para el caso por la autoridad civil, que no reconoce efectos legales a ningún otro matrimonio, y descarta del mismo por completo todo elemento religioso.

«Nada de Iglesia que santifique la unión; nada de ministro eclesiástico que la bendiga y la sobrenaturalice en representación de Jesucristo; nada de oraciones y signos de la cruz para impetrar la protección del Altísimo sobre los desposados. Un despacho administrativo, que lo mismo puede ser una lonja de contratación o un departamento accesorio de Comisaría de vigilancia; un empleado público actuando de pontifice laico, para tomar los dichos a los pretendientes, y una partida en el registro avalando el acto con la firma desvalorada de un intruso..., eso es todo."

Y en franca oposición al consejo de celebración del matrimonio civil a continuación del canónico que había dado el arzobispo DOMÍNECH, el Dr. PÉREZ PLATERO arremeterá contra su simple establecimiento:

(25) En bastardilla en el original,

"El matrimonio civil forzoso no podemos en modo alguno admitirlo los católicos," ni lo admitiremos nunca, como ley obligatoria en el foro internacional; antes bien procuraremos con todo ahínco su abolición por las vías justas y legales, aunque razones más altas que la voluntad abusiva de quien lo impone, aconsejen y manden a las veces atenerse, mientras subsista, al precepto legal, que nada vale de por sí, por adolecer de incurable y manifiesta nulidad en su mismo origen.

«Jamás la arbitrariedad puede ser madre de la obligación y del deber:» quien afirma lo contrario, valdrá posiblemente para asesor asalariado de la tiranía, pero no para buen cristiano. Y arbitraria es la autoridad estatal, imponiendo a todos cuantos quieren casarse, sin excepción, el matrimonio civil obligatorio, por más que en el panteísmo jurídico de los socialistas parlamentarios no se reconozca otro derecho soberano que el del Estado.

...

«El matrimonio no es, aun entre paganos o infieles, un contrato civil.» Ciertamente es que puede llamarsele contrato en razón del consentimiento recíproco y libre de dos voluntades que se obligan, y porque así lo llaman autores de la mejor nota y muchos documentos autorizados de la Iglesia.

«Pase igualmente que se le denomine contrato civil, y así se le considere, por cuanto nace y se lleva a cabo en medio de la sociedad civil, por cuanto influye notablemente, bajo múltiples formas, en el bienestar civil, y por cuanto produce numerosas relaciones jurídicas y efectos civiles.

«Pero de ningún modo puede concederse que sea un contrato civil en cuanto a su parte principal y aspecto dominante y propiedades esenciales: de ningún modo puede concederse que sea un contrato civil en su sustancia...»

Tras este reconocimiento expreso de los efectos civiles del matrimonio pese al cual solo por la fuerza de las circunstancias admitia que los catolicos tuvieran que celebrar el matrimonio civil tras el canónico, pasaría el prelado a negar toda legitimidad del Estado como representante de la sociedad para avalar la union de sus miembros, con unas argumentaciones que, carentes de toda logica, parecen condenar una especie de potestad coactiva por parte del poder civil respecto a la libre elección de los contrayentes.

"¿Cómo ha de ser el Estado quien imponga y regule los sentimientos mas intimos, la simpatia, el amor, la confianza, la afinidad, la entrega reciproca y reciproca compenetración de dos corazones, que se funden y se convierten en uno solo?. ¿Cómo ha de ser el Estado quien ajuste sobre mis hombros una coyunda insoluble, que aprisiona en sus giros toda la existencia, y encamina de por vida mis pasos por sendas de luz o de tinieblas, por las sendas de la felicidad o de la desgracia irremediable? ¿Cómo ha de ser el Estado quien avale y normalice la enajenación, que de si mismos hacen los esposos de cuerpo y alma?. Tanto valdria declararle omnipotente, y sostener que el Estado puede autorizar la esclavitud; ya que menos estrecha, mas flojos son los lazos entre siervo y dueño que entre marido y mujer. La misma paterna autoridad y patria potestad, la mas respetable y veneranda de todas, no basta para incluir a capricho en las bodas de los hijos y hacerlas depender de su propia jurisdicción. ¡Cuanto menos podra hacerlo, por derecho divino natural, la autoridad civil y potestad política, extraña y advenediza, del Estado!."

A estas consideraciones del prelado se sumaria su singular vision de la obligación que ahora se imponia respecto al matrimonio civil como si esta fuera necesariamente excluyente del canonico, lo cual era totalmente infundado. El Dr. PÉREZ PLAISERO se negaba a admitir que un mismo hecho pudiera tener la doble dimensión sacramental y civil, cuestión esta que no tenia por que

influir en la conciencia de los católicos que se unieran según su fe, si bien era hasta cierto punto lógico -decimos hasta cierto punto pues ya hemos visto que ningún otro prelado arremetera con tal fuerza contra el matrimonio civil- que defendiera la plena nulidad de este para los católicos:

"No hay ninguna razón que sirva de abono al intervencionismo del Estado en las condiciones esenciales del matrimonio. Y cuando en ellas interviene, usurpa sacrilegamente poderes que no le pertenecen. Por eso el matrimonio civil, propiamente dicho, como forma legal única de unión conyugal, es un abuso intolerable, una imposición de la fuerza contra toda justicia y todo derecho.

...

"Es así que, por derecho divino positivo y natural, el Estado es incompetente, no tiene facultades el Estado, para intervenir, conocer y legislar en materia de sacramentos, sino que todo lo relativo a ellos pertenece a la Iglesia, y de la Iglesia únicamente depende, y por la Iglesia se regula;"⁽²⁷⁾ luego el Estado se arroga con abuso manifiesto poderes indebidos, y se sale de su propia esfera, cuando avoca a su tribunal el matrimonio y condiciona su legitimidad y validez, y decreta su caducidad o disolución, esto es, cuando impone a los cristianos el matrimonio civil. Por eso no tiene, ante Dios y su Ley, ante el derecho divino, natural y positivo, el más mínimo valor, es nulo enteramente el matrimonio de cristianos llamado matrimonio civil, o sea, celebrado ante el juez o ante cualquier otro funcionario del Estado...; porque es imposible que los cristianos contraigan matrimonio verdadero, si no reciben verdadero sacramento; y las instituciones laicales, por alta que sea su jerarquía, carecen de misión, carecen de derecho para producir o autorizar y condicionar un sacramento."

Cierto es que el obispo avalara sus palabras en autorizada doctrina pontificia, pero esta doctrina poco mellosa podía hacer en un Estado que tenía como uno de sus

(27) En negrita en el original.

principales propósitos acabar con la hegemonía eclesiástica en todos los asuntos de la sociedad civil y cuya reciente Constitución proclamaba solemnemente su absoluta separación de la Iglesia, si bien no dejaba de tener toda su innegable fuerza respecto a los creyentes que quisieran atemperar su actuación a los principios y mandatos religiosos.⁽²⁸⁾ Finalmente pasaría a resumir esta doctrina y su personal desarrollo anterior en puntos concretos determinantes de la orientación a seguir por los católicos y desde el prisma exclusivo de la fe, prisma en el que volvía a inmiscuir al Estado, llegando a calificar de "reo de lesa derecho divino y eclesiástico", cuando ese calificativo más bien debería aplicarlo, en todo caso, a los fieles que, pese a los mandatos eclesiásticos, prefirieran acogerse exclusivamente a la ley civil, ley a la que negaba validez "erga omnes" pareciendo incluir en la invalidez, más allá

(28) Así, el Dr. PÉREZ PLATERO añade:

"Es un dogma de nuestra fe, dice Pío IX, que Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento; y es doctrina de la Iglesia católica que el sacramento no es una cualidad accidental sobrepuesta al contrato, sino algo que pertenece a la esencia misma del matrimonio, de suerte que la unión conyugal entre cristianos no es legítima sino en el matrimonio-sacramento, fuera del cual todo lo que se haga no es más que un puro concubinato. Una ley civil que, suponiendo la separabilidad entre el sacramento y el contrato de los católicos, reglamentara la validez del matrimonio, está en contradicción con la doctrina de la Iglesia, usurpa sus derechos inalienables, y prácticamente coloca en el mismo plano el concubinato y el sacramento del matrimonio, al sancionarlos ambos como igualmente legítimos... toda unión de hombre y de mujer cristianos fuera del sacramento, aunque se realice en virtud de ley civil, no es más que vergonzoso y execrable concubinato. El sacramento no puede nunca separarse del contrato matrimonial.

...

"Esto no obstante, como el matrimonio sea fuente y cauce de relaciones jurídicas íntimamente conexas con el derecho individual y con el bien común, cuyo ordenamiento y tutela incumbe estrictamente al Estado, libre es la potestad secular moviéndose en su esfera, y por lo tanto legislando sobre los efectos, consecuencias y garantías civiles del matrimonio de sus súbditos, con tal que deje a la autoridad divina de la Iglesia lo que sólo a ella encomendó su divino Fundador... Esa sería obra conciliadora y fructífera, y merecería la aprobación y los aplausos de todos."

de la doctrina pontificia, incluso a los ciudadanos ajenos a la fe cristiana ya que el exclusivo sometimiento a ella derivaba no en matrimonio sino en mera "barraganía o concubinato", afirmación que, no obstante, quedaba matizada en la referencia a los creyentes en el punto siguiente al indicar que quienes tal hicieran quedaban excluidos de los sacramentos y del enterramiento católicos. El Dr. PÉREZ PLATERO concluiría sus admoniciones admitiendo muy a regañadientes el cumplimiento de las formalidades de la ley si ello fuera necesario "para evitar vejámenes injustos, y sólo constreñidos por la fuerza", palabras, como ya hemos destacado, diametralmente opuestas a las contenidas en las recomendaciones del arzobispo de Zaragoza:

"12. El matrimonio en sí mismo considerado es por su misma naturaleza una cosa sagrada y santa.

"29. El matrimonio de los cristianos es verdadera y propiamente un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo.

"32. El sacramento y el contrato marital, o matrimonio, son una sola y misma cosa, y de ningún modo pueden separarse.

"42. Sólo a la Iglesia pertenece, por disposición de su divino Fundador, toda la economía y reglamentación del matrimonio entre cristianos. Por consiguiente:

"52. El Estado no tiene facultades para casar y descasar a los católicos, y se hace reo de lesa derecho divino y eclesiástico al declarar y tener como válido un matrimonio celebrado ante el funcionario público, o al disolver el matrimonio canónico.

"62. El llamado matrimonio civil no es verdadero y legítimo matrimonio; es solamente barraganía o concubinato.

"72. Los que sólo se casan civilmente, no son marido y mujer, ni están casados de verdad; son manceba y concubino; y ni pueden ser admitidos a la participación de los sacramentos, ni recibir sepultura eclesiástica.

«Por todo lo cual, en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia y en nombre de la conciencia cristiana, os requerimos que no os atenteis contra la validez o la indisolubilidad del santo matrimonio, conformándoos con haber observado el trámite de las prescripciones legales o con haber obtenido la sentencia favorable de los tribunales civiles, porque tanto valdría caer en gravísimo pecado y vivir en estado de eterna condenación. Y, si para evitar vejámenes injustos, y solo constreñidos por la fuerza, convenga obedecer en lo posible y poner en práctica las formalidades de la ley; pero que esto se entienda, permaneciendo firme e inviolable la obligación de acudir siempre a la autoridad eclesiástica y atenerse puntualmente a sus cánones, según lo que Dios ha ordenado y la Iglesia manda y enseña...»⁽²⁹⁾

Si bien ya el obispo de Orense había calificado de "amancebamiento vulgar" y de "recurso vil de la pasión inmundia" al matrimonio civil; la insistencia en considerarlo como concubinato, respecto a los cristianos, siguiendo las doctrinas pontificias, la forma en que aludía al poder civil y el resto de la terminología y expresiones utilizadas por el Dr. PEREZ PLATERO en una pastoral dedicada íntegramente al tema, provocaría la reacción gubernamental, consecuencia, probablemente, de los comentarios y publicidad que le había dado la prensa.⁽³⁰⁾

(29) 30 de marzo de 1932, "Instrucción Pastoral.- El Matrimonio Civil", BDE de Segovia, 77, 30 de marzo de 1932, núm. 6, págs. 137-163. Dada la repercusión que tendría esta pastoral la incluimos íntegra en el apéndice. (Ver el núm. 6)

(30) BAYLORI y ARBELLOA, indican que el primer comentario sobre la pastoral debió ser el aparecido en el semanario republicano "Segovia" de 14 de abril de 1932. Se basaba en un resumen publicado por el diario católico "El Adelantado de Segovia", del que recogía los párrafos más polémicos y acababa pidiendo la intervención del gobernador civil. Añaden los citados autores que la reacción de la prensa republicana contra el obispo de Segovia fue violenta, antes y después del 17 de junio, fecha en que se presentaría a las Cortes una proposición pidiendo el levantamiento de la sanción gubernamental que se le impondría. (*Iglesia y Estado durante la segunda...* III, pág. 72, notas 2 y 3). La de Derechas, defendería, como es obvio la postura del obispo segoviano, tal haría "El Debate", indicando que la intromisión civil no era más que una nueva persecución a la Iglesia católica y aprovechado para criticar también la nueva ley.

Esta reacción, sin embargo, no iba a ser inmediata. Más de dos meses dejaría transcurrir el gobierno antes de manifestarse sobre la pastoral e iba a hacerlo coincidiendo, precisamente, con las fechas del debate parlamentario sobre la ley del matrimonio civil.⁽³¹⁾ El día 11 de junio de 1932 publicaba el diario "La Luz" de Madrid, la noticia de que el ministro de Justicia, Álvaro DE ALBORNÓZ, había firmado una orden suspendiendo las temporalidades al obispo de Segovia. El consejo de Ministros del día 14 acordaría tal suspensión, noticia que sería recogida por toda la prensa.

"... censurando sobre todo su carácter de obligatoriedad y considerándola odiosa en un régimen de libertad y de democracia. Porque ni siquiera prescribe el matrimonio civil facultativo, como ocurre en Inglaterra y Norteamérica, sino el obligatorio para vejar la conciencia cristiana..."

Introducía el periódico, además, una observación a la que los obispos no se referirían hasta que la entrada en vigor de la ley fuera inminente y una vez se hubieran perfilado en ella los correspondientes impedimentos de consanguinidad que el proyecto hacía más laxos respecto a los vigentes y también respecto a los establecidos en la legislación canónica, si bien no suprimía, como la prensa denunciaria exageradamente todos los impedimentos por esta causa:

"...al suprimir, con una ligereza inexplicable, todos los impedimentos de consanguinidad, llegaba incluso a legalizar el incesto."

Concluía el rotativo advirtiendo, con una afirmación lejana a la realidad legal que había suprimido, precisamente, la posibilidad de la filiación ilegítima, que los católicos seguirían casándose por la iglesia "a riesgo incluso... de que sean declarados civilmente ilegítimos sus hijos."

"Lo del día.- Lo del Obispo de Segovia", "El Debate", 12 de junio de 1932.

- (31) El proyecto de ley fue leído ante las Cortes por el ministro de Justicia el día 11 de mayo de 1932 (ver el apéndice núm. 7); aprobado el día 12 por la Comisión de Justicia fue retirado por ésta el día 13 para darle una nueva redacción, siendo leído el nuevo dictamen el día 17. Pasó a discutirse por la Cámara el día 20 incorporándose al texto una enmienda presentada por el radical-socialista BOTELLA ASENSI y otros diputados y, ausentes de la sesión los diputados sacerdotes GARCÍA GALLEGOS y GUALLAR POZA, que habían pedido la palabra, fue aprobado todo el articulado sin discusión. Pero antes de pasar a la votación definitiva, el proyecto fue retirado por el Ministro de Justicia. El 2 de junio ALBORNÓZ leía un texto similar aunque más preciso, que fue aprobado por la Comisión y presentado a debate el día siguiente, fue aprobado por los diputados el día 15 de junio, sin ninguna discusión, y aceptado definitivamente el día 16, sin votación. (*Esglesia i Estat durant la segona...*, III, pág. 118, nota 3). (Ver el apéndice núm. 8).

La respuesta de la jerarquía eclesiástica ante esta nueva intervención del poder civil contra uno de sus miembros sería, lógicamente, muy rápida, pero ello no quiere decir que tal intervención hubiera provocado un profundo impacto en el episcopado, o la mera suspensión de temporalidades, aunque era, desde luego, una grave intervención del poder civil, no llegaba a revestir el agravio inferido en los casos del cardenal SEGURA o del obispo de Vitoria), tal como parece desprenderse de las cartas cruzadas por aquellas fechas entre alguno de sus miembros y el cardenal VIDAL. Así, al día siguiente de la aparición de la noticia de la suspensión de las temporalidades al Dr. PEREZ PLATERO, escribía el cardenal ILUNDAIN al arzobispo de Tarragona hablandole del robo que acababa de sufrir en su palacio episcopal y del próximo viaje a Roma que ambos purpurados proyectaban; solo las últimas líneas de su carta se referían al tema: "Acabo de leer que el Ministro de Justicia ha suspendido las temporalidades al Sr. Obispo de Segovia por su pastoral sobre el matrimonio civil. es el colmo de la incomprensión del ministerio pastoral y de la doctrina católica, que estamos enseñando constantemente los Prelados." La respuesta del cardenal VIDAL el 15 de junio era una mera postdata a su carta, no solo mas laconica que el comentario del Dr. ILUNDAIN sino desprobando, en cierta forma, algunas de las expresiones utilizadas por el obispo de Segovia: "Lamento muy de veras la intromisión civil en el caso de Segovia. He leído la carta pastoral y me ha parecido leer algunas palabras que presumo no habría V. usado." (22)

(22) *Església i Estat durant la segona...*, III, págs. 71-72 y 86-87.

Pero no cabía duda que ante la intromisión civil era necesaria una manifestación por parte de la jerarquía, tal como los distintos miembros de esta pensaban y como se desprende de la carta enviada a VIDAL por el obispo de Tortosa, que el día 21 de junio, a su regreso de una peregrinación a Lourdes con el arzobispo de Valencia, le decía: "Con el Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia hablé, como es natural, del caso del Sr. Obispo de Segovia. Ni él, y yo menos, teníamos datos para juzgar la oportunidad de una acción común de los demás prelados, en este asunto, juzgando que lo mejor sería ponerlo en manos de V. Emma. Rma., ofreciéndonos a cuanto fuera. No sé si el Sr. Arzobispo habrá escrito a V. Emma. ... La doctrina enseñada por el Sr. Obispo -hombre tan competente en usar las fórmulas apropiadas, cual se puede esperar de un antiguo Juez de la Rota- no cabe duda que es la corriente y por todos enseñada y defendida. El afirmarlo todos los Prelados, ante la injusta agresión sufrida por un Hermano, parece antural y casi obligado. Pero estas actitudes tienen, a veces, derivaciones graves, y sólo quien está al tanto de los datos precisos puede discernir de que sea o no prudente afrontarias...".

En efecto, el cardenal VIDAL había ya optado el día 17 por poner un telegrama individual, si bien aludiendo a todo el episcopado, al presidente del Gobierno: "Ha herido profundamente alma Obispos españoles sanción impuesta Hermano queridísimo de Segovia, quien nunca ha tenido intención atacar nuevo régimen republicano, sino defender doctrina católica, obligación que incumbe a todos los Prelados. Espero procure solución digna y armónica en bien

(34) *Església i Estat durant la segona...*, III, pág. 73, nota 4.

de todos...". AZAÑA contestaría el mismo día reiterándole la buen disposición del gobierno a mantener la paz y esperando que "por todos sean respetadas en el fondo y en la forma las leyes de la República".⁽³⁵⁾

A la vez que cursaba dicho telegrama del cual -como era tradicional en su actitud- daría cuenta a los demás metropolitanos,⁽³⁶⁾ al nuncio y al cardenal PACELLI, VIDAL y BARRAQUER escribía una carta de adhesión al obispo de Segovia lamentando lo ocurrido "con motivo de su última y

(35) Op. cit., III, pág. 87-89.

(36) Los metropolitanos, a su vez, darían traslado del mismo a sus sufragáneos como se desprende de la publicidad que le dieron diversos boletines eclesiásticos (ver, por ejemplo, "Telegrama del Episcopado español", BDE de Burgos, año 75, 30 de junio de 1932, núm. 12, pág. 209; BDE de Ávila, año 43, 30 de julio de 1932, núm. 7, pág. 303; BDE de Córdoba, año 75, 30 de julio de 1932, núm. 12, pág. 163; BDE de Valencia, 1 de agosto de 1932, núm. 2152, pág. 238; BDE de Tarazona y Tudela, año 70, 15 de agosto de 1932, núm. 713, págs. 525-526 (este boletín indicaba que estaba tomado del del arzobispado de Burgos) o BDE de Coria, 1 de octubre de 1932, núm. 43, pág. 555). No obstante en esta ocasión los boletines eclesiásticos, salvo el lógico caso del de la diócesis de Segovia, se limitarían a la difusión del texto del telegrama sin dar más publicidad al asunto.

El boletín eclesiástico de Segovia, aparte de dar difusión al telegrama precedió la publicación de dos documentos relativos al tema; uno se refería a la gratitud del obispo por los mensajes de protesta y adhesión recibidos de los fieles, ante "la Campaña... promovida por la prensa izquierdista de la capital y que llegó a su culminación en las Cortes Constituyentes, en las que un Señor Diputado pidió se aplicara al merísimo Pastor de esta Diócesis la Ley de Defensa de la República...", el otro era una crónica de las adhesiones recibidas, a las que se sumaba la redacción del propio boletín, informando que la pastoral

"...escrita para sus diocesanos, sin intuir su difusión en área más amplia de este Obispado, ha sido viva y profusamente solicitada, hasta de los Estados Unidos de América del Norte, por la 'Conferencia del bienestar católico', que se propone publicarla en la Prensa de aquel país. Hemos servido ya todos los números de que podíamos disponer. Como la demanda sigue, nos vemos obligados a decir que, agotados los ejemplares, no podemos atender más peticiones..."

"Publicistas y Catadralicos, eclesiásticos y personas de acreditada solvencia cultural, no han regateado sus elogios a la misma y ello nos satisface como católicos y como segovianos..."

(s.f., "Gratitud del Excmo. Prelado" y "Nuestra adhesión al Prelado". BDE de Segovia, año 77, 30 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 245-248).

muy fundamental pastoral" y señalando la necesidad de "estar siempre vigilantes, con suma prudencia y energía, pues los tiempos son malos". A esta carta, que le producía "grandes alientos y no pequeños consuelos", contestaría el día 24 el Dr. PEREZ PLAÍERO, ofreciéndose como víctima propiciatoria: "Estoy muy tranquilo y muy contento de surtir algo; a mucho más me ofrezco y dispongo, por la causa de la Iglesia. Poco de lamentar habría si a mí, y con esto, se hubiesen destogado las últimas iras; pero... Dios se apiade de todos... Ahora leo en la prensa su telegrama (a AZANA), que me ha emocionado. Pido a Dios que a cuenta de mis temporalidades (a las cuales renuncio) reconozca la libertad de los prelados".¹³⁷

No solo la jerarquía se ocupó de la sanción impuesta al Dr. PEREZ PLAÍERO. Los diputados católicos, por medio de una proposición presentada a las Cortes el mismo día 17 por el sacerdote diputado Santiago GUALLAR, iniciaban un debate con el fin de conseguir que la sanción fuera levantada. En el el ministro ALBORNOZ mantuvo la justicia y necesidad de la

Con fecha 30 de junio y precediendo al texto del telegrama de VIGAL I BARRAQUER, publicaría el Boletín de la diócesis segoviana una crónica hablando de la suspensión de las temporalidades a su obispo, sobre lo que, decía, esperaba se hubiera efectuado, al menos, mediante orden ministerial debidamente publicada en la Gaceta. Al no haberse realizado así solo se conocía la existencia de dicha orden por las noticias de la prensa, "con glosas de censura o aplauso, de protesta o de aprobación, según el ideario de cada periódico." A continuación de este comentario relataba la sesión habida en la Cámara sobre la suspensión de las temporalidades, a la que más adelante nos referimos, y reiteraba el relato de las adhesiones recibidas por el prelado.

(s.f., "Suspensión de temporalidades al Excmo. Prelado", BDE de Segovia, año 77, 30 de junio de 1932, num. 12, págs. 277-281).

(137) *Església i Estat durant la segona...*, III, pág. 88, nota 2.

sancion y, leyendo los primeros párrafos de la pastoral, y las frases que aludían al matrimonio civil como "barraganía y concubinato", "monjea y concubino", etc., hizo un comentario de la misma. Frases y comentario provocaron una fuerte polémica en la Cámara que, tras la intervención de diversos diputados, pasó a la votación, dando 205 votos negativos y 35 afirmativos, con lo que la sanción al Dr. PÉREZ FLAHERO se mantuvo en vigor.⁽³⁸⁾

3. La restante actuación de la jerarquía eclesiástica ante las leyes civiles sobre el matrimonio.

Como hemos visto, tras el documento de 20 de diciembre de 1931, el episcopado, de forma individual, siguió orientando a los fieles sobre la legislación matrimonialista del Estado y según el tema iba cobrando mayor actualidad.⁽³⁹⁾ Pero hasta transcurrido un mes tras la promulgación de la ley del divorcio, y pocos días después de la pastoral del obispo de Segovia, no iba a comenzar a plantearse la necesidad de un nuevo documento colectivo, referido este únicamente al tema del matrimonio. Fue el 6 de abril de 1932

(38) s.f., "Suspensión de temporalidades al Excmo. Prelado", BOE de Segovia citado.

(39) Con independencia de la ley del divorcio de 2 de marzo y de la de matrimonio civil, promulgada el 3 de julio, había sido aprobada por las Cortes, el 20 de mayo, una ley que admitía la inscripción en el Registro civil, como legítimos, de los hijos habidos fuera del matrimonio.

cuando el vicario general de Vitoria escribía, ausente su prelado, al arzobispo de Tarragona habiéndole de la conveniencia de un documento colectivo para evitar que por los obispos se dieran normas que "en lo accidental, claro está- no estén del todo en la plena armonía que conviene". La preocupación fundamental del vicario apuntaba a la doble competencia que la ley del divorcio suponía en orden a sentencias que pudieran dictarse por tribunales civiles y eclesiásticos.⁽⁴⁰⁾ VIDAL y BARRAQUER, según le contestaba el día 15, estaba también "pensando la manera más apropiada de dar solución a tan capital asunto" y, por su parte, el arzobispo de Sevilla había enviado, por conducto del nuncio, unas preces a la Santa Sede rogando normas para la manera de obrar cuando los fieles tuvieran que acudir en causa de

(40) "Claro -decía el vicario general de Vitoria- que hay que recomendar a los fieles que nunca pidan el divorcio vincular. Claro también que no podemos reconocer la competencia de los Tribunales civiles para juzgar ni siquiera las causas de separación o divorcio imperfecto, y que ha de recomendárseles que presenten sus demandas, cuando hay razones para ello, a los Tribunales eclesiásticos. Pero ya hoy no ha de bastar, según la nueva ley, que la esposa presente en el Tribunal civil el testimonio de haber presentado la demanda de separación en el Tribunal Eclesiástico para que obtenga su depósito y alimentos, y pueda así, con la debida libertad, litigar contra su marido. Según la nueva ley, este depósito y alimentos no pueden acordarse sino después de *adulida* la demanda de divorcio o separación presentada en el Tribunal civil. Según esto, ¿puede recomendarse, como procedimiento, que se presente primero la demanda en el Tribunal eclesiástico, y después -y con la sola intención de obtener el depósito y alimentos- se presente otra en el Tribunal civil sólo -y en todo caso- solicitando la separación y únicamente por causas reconocidas en la legislación eclesiástica? ¿Y qué para el caso de disenso en las sentencias eclesiástica y civil, en el caso de que la eclesiástica fuera negando el divorcio, y la civil concediéndole? Habría que decir clara y abiertamente que no podían los fieles alenarse a la sentencia civil. Por otro lado, parece que no se puede dejar de dar normas prácticas a los fieles acerca de estas cuestiones". (*Església i Estat durant la segona...*, II, págs. 617-618, nota 1).

divorcio imperfecto solicitando efectos civiles, sobre todo ante "las consecuencias gravísimas" del artículo 39 de la ley del divorcio.⁽⁴¹⁾

Pero no sería hasta el 5 de junio de 1932, es decir, ya presentado a las Cortes el proyecto de ley sobre matrimonio civil, pero aun no entregado a la Cámara en su redacción definitiva, y varios meses después de ser promulgada la ley del divorcio, cuando VIDAL y BARRAQUER manifestara, en una carta enviada al Dr. ILUNDAIN, que estaba "preparando unas normas o instrucciones sobre lo de Divorcios", añadiendo "No creo que sea cosa definitiva la ley sobre el Matrimonio civil y creo convendría esperar a conocer su texto antes de formular protesta alguna, si se estima el caso".⁽⁴²⁾

Tras esta carta los dos cardenales, VIDAL e ILUNDAIN, salieron para Roma a fin de efectuar la visita "ad limina", que aquel año habían de realizar los obispos españoles. Entre los puntos que llevaba el arzobispo de Tarragona para tratar con el Secretario de Estado y con Pío XI figuraba el del matrimonio civil y la conveniencia de una declaración de los metropolitanos dando instrucciones a los fieles, de la cual presentó al cardenal PACELLI el texto que había preparado. De regreso en Tarragona, le remitiría, el día 20 de julio, la redacción definitiva de los puntos sexto y séptimo de la declaración, tal como aquel le había solicitado, indicándole que la había realizado "de manera que no prescindan los fieles de acudir a los Tribunales eclesiásticos para no perder la costumbre, pero sin obligarles a ello. De esta manera quedara completamente

(41) *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, págs. 40-41.

(42) *Op. cit.*, III, págs. 66-69.

libre la Santa Sede de dictar, más adelante, las disposiciones oportunas para poder hacer alguna concesión más amplia al poder civil, el día que se hicieran 'trattative' para un nuevo Convenio o Concordato" y haciéndole alguna aclaración sobre la forma en que había enfocado los casos de urgencia.***

3.1. Las orientaciones a los párrocos y a los fieles de los obispos de Toledo, Tarazona (administrador apostólico de Tudela), Salamanca, Zamora, Ávila y Madrid-Alcalá.

Pero antes de que el cardenal VIDAL enviara esta carta al cardenal FACELLI, el nuncio monseñor IEDESCHINI, había recibido instrucciones desde Roma a fin de que los obispos orientasen a los fieles sobre la legislación matrimonialista del Estado. Al trasladar éstas, el 15 de julio, a todo el episcopado*** no iba a advertirles que los metropolitanos

(43) Op. cit., III, págs. 137-138.

(44) "La aprobación de la Ley del divorcio por las Cortes Constituyentes -decía- y las demás disposiciones sobre el matrimonio, y particularmente la ley que impone como único causante de efectos civiles el llamado matrimonio civil y que declara competencia exclusiva para juzgar los pleitos matrimoniales la de los tribunales civiles, han causado vivo e intenso dolor en el augusto corazón de Su Santidad.

"El amor y la solicitud de Padre hacen presentir al Soberano Pontífice las más graves consecuencias de estas nuevas leyes que, al ser violadoras de la sacrosanta ley divina, son también profundamente funestas para la familia, la sociedad y la conciencia católica.

"El Augusto Pontífice confía en que el venerable y celoso episcopado español, el cual, ante la gravedad de las circunstancias se ha mostrado tan claramente a la altura de su deber y ha hecho resplandecer por doquiera su apostólica solicitud, continuará en su altísima obra redoblando esfuerzos y empeño, a fin de prevenir y evitar entre los fieles los graves daños que son de temer para el bien espiritual y social de España, y para que entre el pueblo alcancen la más amplia y más oportuna divulgación los principios católicos sobre esta tan delicada e importante materia, de tal suerte que, con promoverse una más profunda educación religiosa y moral de nuestro querido pueblo, la situación actual de lucha y de pesar se

publicarían una instrucción colectiva.⁴⁴ Lo cual tuvo como consecuencia el que algunos prelados se apresuraran a dar tales orientaciones. Así lo hicieron, entre otros, los de Toledo, Tarazona y Tudela, Salamanca, Zamora, Ávila y Madrid-Alcalá, reproduciendo otros obispos, como los de Tenerife, Pamplona y Mallorca, en sus respectivos boletines eclesiásticos, las instrucciones dadas por el de Madrid-Alcalá. (46)

Estas instrucciones, cuya forma en la exposición de la doctrina católica distaba mucho de la terminología que había empleado en su pastoral el obispo de Segovia, revistieron en unos casos, como el de Toledo, el carácter de respuestas a

trueque providencialmente en saludable ocasión de fortalecimiento del espíritu de vida católica, que fue siempre tan constante y floreciente en este noble y amado País". (*Església i Estat durant la segona...*, III, págs. 118-119).

(45) M. BAILLORI y V.M. ARBELDA señalan la posibilidad de que TEDESCHINI no tuviera noticia de esta instrucción. (Op. cit., III, pág. 30).

(46) Sobre el hecho del desconocimiento de que por los metropolitanos se iba a publicar un documento colectivo y la coexistencia de este con las normas dadas a los fieles por algunos obispos, escribiría el Dr. PLA y DENIEL al cardenal VIDAL el 5 de agosto:

"Si yo hubiese sabido que se iba a publicar este Documento por los Rmos. Metropolitanos, no habría publicado la Instrucción Pastoral a los fieles y las Normas al Clero Diocesano que en el *Boletín* salido precisamente ayer (aun cuando lleva fecha de 30 de julio, pero se retrasó por dichos documentos) publiqué, del cual le adjunto un ejemplar.

"Como iba anteayer a entrar en vigor la nueva ley de Matrimonio civil, por cumplirse los treinta días de su publicación en la *Gaceta*, y por una parte iban publicándose Pastorales, Instrucciones y Normas por varios Prelados, como los de Segovia, Madrid, Cuenca, Salamanca, etc., y, por otra, me pedían los Párrocos instrucciones, creí un deber publicar una breve Instrucción para los fieles y Normas prácticas para los párrocos. Afortunadamente no descubro contradicción con el Documento más autorizado de los Rmos. Metropolitanos, y por tanto creo que, a la vez que se declaran obligatorias para esta diócesis las normas del Documento de los Rmos. Metropolitanos, pueden subsistir las normas dadas por mí al Clero diocesano, que tocan detalles prácticos a los cuales no desciende el Documento de los Rmos. Metropolitanos. Si viera Vuestra Eminencia alguna contradicción, le agradeceré me lo indique para hacer la rectificación que fuese necesaria." (Op. cit., III, págs. 174-176).

consultas formuladas por el clero y redactadas por la misma dirección del boletín eclesiástico; en otros, como los de Tarazona y Tudela o de Avila, tendrían la forma de pastoral del respectivo obispo a sus fieles seguida de normas al clero y en otros, como Salamanca y Madrid-Alcalá, fueron advertencias o normas a los diocesanos; y si bien eran casi homogéneos en el contenido y en el criterio expuesto y su principal finalidad era la de concordar la actuación canónica y civil de los católicos en orden al matrimonio, no dejaron de traslucir alguna disparidad de matiz, sobre todo en lo referente a la celebración de las dos ceremonias, civil y canónica, siendo, por ejemplo, más dura la forma de exposición del obispo de Salamanca, que la de los Dres. PLA Y DENIEL y EIJO Y GARAY.

El día 16 de julio de 1932 publicaría el boletín eclesiástico de Toledo unas breves aclaraciones a los párrocos ante la inminente entrada en vigor (el 3 de agosto) de la ley sobre el matrimonio civil, si bien no dejando de advertir que tales aclaraciones se hacían en razón a las numerosas consultas que habían llegado a la redacción del boletín y que quedaban supeditadas a las normas "que puedan dar quienes han de interpretar auténticamente las necesidades de cada tiempo y aplicarles el remedio más oportuno y eficaz."

Efectuada esta advertencia comenzaban los redactores recordando la doctrina general sobre el matrimonio: por su propia índole pertenecía al orden religioso; entre cristianos era un sacramento instituido por Jesucristo, y, como tal, tan sólo la Iglesia tenía competencia sobre él. La Iglesia, sin embargo, no negaba que el poder civil, sin entrar, desde luego, en la regulación de la esencia del contrato matrimonial, cosa que no le pertenecía, pudiera regular sus efectos civiles; fuera de ello no podía hacer

otra cosa que "garantizar con sus leyes lo que la Iglesia haya dispuesto", tal como hasta entonces había sucedido en España.

Esto, con la nueva ley del matrimonio civil, había dejado de ser así, ya que, por ella el Estado pretendía regular todo lo relativo a este, ante lo que era preciso recordar que la Iglesia "sólo puede ver en el matrimonio llamado civil entre bautizados, un requisito que la potestad civil exige para que el matrimonio goce de ciertos efectos civiles."

Sentada así la doctrina general pasaba la dirección del boletín a responder a determinados casos planteados por los párrocos de los que nos referimos a los más directamente relacionados con la nueva norma:

El primero explicaba que sus feligreses veían con "cierta repugnancia" el tener que ir al juzgado a declarar su matrimonio por lo que muchos prescindirían de hacerlo "y aún se escandalizarán de que yo les diga que lo cumplan", de ahí que el sacerdote no sabía si debía recomendarles o no que lo hicieran o debía ceñirse a la celebración del matrimonio canónico dejando a los fieles que actuaran como estimaran conveniente.

A este planteamiento respondía el boletín destacando las graves consecuencias que podían derivarse de no cumplir la exigencia que la ley determinaba, toda vez que un cónyuge casado canónicamente podía contraer otro matrimonio civil, reputado legal, aunque ante la Iglesia sólo fuera válido el primero. De ahí que "la Iglesia ha tolerado que los fieles cumplan las prescripciones civiles respecto del matrimonio, siempre que entiendan que al comparecer ante el juez no realizan sino una solemnidad civil, que para los

católicos no es verdadero matrimonio, sino una condición que la ley exige para los efectos civiles del matrimonio."

"Más aún: La Iglesia, en varios documentos, ha aconsejado que no se omitan esas formalidades civiles para evitar los graves daños y peligros que para los cónyuges y sus hijos y para el mismo matrimonio canónico podía seguirse de la omisión."

Así sentados los principios eclesiásticos se planteaba seguidamente qué ceremonia debía realizarse primero y si era posible acceder a que precediera la civil a la canónica. Ante este caso la respuesta era que debía celebrarse antes el matrimonio canónico; no obstante, si algún caso de necesidad se presentara, debía consultarse con el ordinario de la diócesis.

Otra pregunta era si los jueces católicos podían lícitamente realizar matrimonios civiles, lo cual sí podían hacer "siempre que miren este acto como una mera solemnidad civil."

Trataba la siguiente de cómo había de actuar el párroco cuando una pareja, habiendo celebrado sólo matrimonio civil, se arrepintiera y quisiera celebrar el canónico. Como la nueva ley no exigía, como antes, el apostatar de la religión católica para contraer matrimonio civil no se les podía considerar, por tanto, apóstatas. no faltaría empero "cierta presunción de que lo sean, y en muchos casos, el matrimonio civil será un alarde de irreligión y siempre una causa de escándalo para los fieles." Por ello, y de acuerdo con lo determinado por la Santa Sede, siempre que el obispo no diera normas generales, debería acudir a él en cada caso. (47)

(47) s.f., "Sobre la ley del matrimonio civil.- Respuestas a algunas consultas", BOE de Toledo, año 88, 16 de julio de 1932, núm. 14, págs. 223-227.

Recordaba el Dr. GOMA en su pastoral de 29 de julio como al discutirse la ley del divorcio en el Parlamento se habia dirigido ya a sus fieles para hablar de "un punto tan vivo y capital de la doctrina y de la moral católica", ley que finalmente habia sido aprobada "en forma que contiene una serie de afirmaciones totalmente inadmisibles bajo el punto de vista de la ortodoxia católica."

Ahora, "siguiendo el plan de laicización total de la vida nacional" aparecia la ley del matrimonio civil, tema sobre el que el prelado pasaba a reiterar los principios doctrinales y sociales ya expuestos en su anterior pastoral: El matrimonio era base de la sociedad y su regulación incidia en todo el entramado social: la familia, la religion y hasta "las costumbres publicas, la paz y la prosperidad del Estado", ya que todo ello estaba "trabado con esta institucion fundamental", de ahí que la Iglesia debiera adoctrinar a sus fieles sobre ello.

Para iniciar tal adoctrinamiento comenzaba el Dr. GOMÁ tratando, de nuevo comedidamente, de las relaciones entre la Iglesia y el Estado:

"Juzgamos innecesario hacer protesta de respeto al legislador y al poder que en él reside. Desde comienzos del cambio de regimen y obedeciendo elevadissimas indicaciones, hemos exagerado -si cabe el exceso en el deber y en la prudencia en cumplirlo- nuestras deferencias para con el poder civil."

Ahora bien, no podia en ese momento sustraerse "a los deberes que impone una situación contradictoria de derecho", máxime cuando desde los primeros tiempos habia sido precisamente la Iglesia la que habia dignificado la institucion que ahora se pretendia regular civilmente. De ahí que, no oponiendo nada a la ley "en lo que tenga de legitimo", mas juzgandola de acuerdo con el derecho natural

y divino, quería insistir en la doctrina católica "en los puntos en que la ley de matrimonio civil podría sugerir dudas", por lo que daba seguidamente normas prácticas a sacerdotes y fieles.

Tales normas se iniciaban, como hemos visto que se había hecho por el boletín eclesiástico de Toledo, con una exposición general de carácter doctrinal, si bien el Dr. GOMA quería ir contrastando esta con los principios que venía a instaurar la nueva ley.

De esta forma comenzaba recogiendo lo establecido en su artículo primero, por el que se determinaba que no se reconocía más forma de matrimonio que el civil. La doctrina de la Iglesia era, obviamente, otra, no había más matrimonio que el sacramental celebrado en la Iglesia, tal como habían reiterado León XIII y Pío XI.

"... el matrimonio de los bautizados no puede 'laicizarse', como ninguno de los sacramentos puede hacerse civil; es decir, que como no hay cristianos sin el bautismo de la Iglesia, tampoco hay legítimamente casados, entre los cristianos, que no lo hayan sido según la Iglesia."

Otra novedad de la ley era la supresión del impedimento de contraer matrimonio por los ordenados *in sacris* o profesos en una orden religiosa, "°" extremo sobre el que el obispo recordaba las penas canónicas que recaían sobre quienes infringieran sus votos.

(48) Ya en septiembre de 1931 "El Sol" había dado la noticia de que el ministro de Justicia recibía solicitudes de ordenados que poseían familia y que, al prohibir el Código civil que pudieran contraer matrimonio, no podían disfrutar, ni ellos ni sus hijos, de una situación legal. Ante tales solicitudes el ministro había abierto una información que, sometida al Consejo de ministros, había tenido como resultado el que este aprobara la redacción de una ley que aboliera dicho precepto del Código, ("El Sol", 16 de septiembre de 1931).

Introducía la ley la novedad del impedimento de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. En este punto difería el derecho civil y el canónico, ya que este era más estricto en sus prohibiciones de unión matrimonial entre parientes; de ahí que quisiera llamar "gravemente la atención" de los párrocos, sobre todo en lo que se refería "al enlace matrimonial de tios con sobrinas y viceversa", ya que la Santa Sede consideraba la frecuencia de estas uniones como "mal gravísimo".

La ley por otra parte, concedía al juez de primera instancia del partido la facultad de dispensar de los impedimentos que establecía. Esto no era, desde luego, aplicable en el caso de los católicos, ya que esta facultad solo correspondía a la iglesia.

Por último, la ley afirmaba que la jurisdicción civil era la única competente para resolver todas las cuestiones que se derivaran de su aplicación, incluso las relativas a la validez o nulidad de matrimonios canónicos celebrados antes de su entrada en vigor, para lo cual los tribunales aplicarían las leyes canónicas por las que fueron contraidos.

Sobre esta intromisión del poder civil en las cuestiones eclesiásticas, quería el obispo puntualizar muy exactamente su alcance mediante tres "verdades inconcusas":

Primera: El poder civil no tenía jurisdicción alguna sobre las cosas eclesiásticas, una de las cuales era el matrimonio, que no solo atañía a la conciencia de los contrayentes, "sino al culto social de la iglesia."

Segunda: Si los tribunales de justicia tenían la misión de interpretar y aplicar las leyes dictadas por el poder

legislativo, la Iglesia tenía sus propios jueces, no pudiendo el poder civil invadir el fuero eclesiástico.

Tercera: El matrimonio, aun entre los bautizados, tenía dos aspectos, el contractual, que, aunque inseparable del sacramento, comportaba efectos civiles y el sacramental, con sus efectos de unidad, indisolubilidad, mutuos deberes, etc. Los asuntos matrimoniales podían ser, así, de "jurisdicción mixta", correspondiendo al poder civil determinar las cuestiones civiles del matrimonio canónico y al eclesiástica todo cuanto atañía a la esencia de este, siendo violación de fuero el que cualquiera de los dos poderes quisiera inmiscuirse en la esfera del otro.

No debían extrañarse los fieles de la firmeza con que la Iglesia defendía "su doctrina y sus derechos en lo tocante al matrimonio ni que sean irreductibles nuestras diferencias de criterio con el poder civil". Ello derivaba de la distinta concepción que uno y otra tenían del hombre, siendo para la Iglesia un ser esencialmente religioso con un destino sobrenatural. Contrariamente, no tenía esa misma visión el régimen estatal español, al que el prelado criticaba, si bien sin mencionarlo:

"No ratiocinan así los hombres del laicismo moderno. O parten del principio filosófico, radicalmente naturalista, según el cual no tiene el hombre otros destinos que los de esta vida y que la religión, que nos ordena a otra vida ultramundana, no debe tener ningún lugar en la vida individual y social; o se relega la práctica de la religión a la vida privada, sin manifestación ni influencia alguna de carácter social. En ambos casos, el Estado deberá ser laico, legislará sobre todos los aspectos de la vida ciudadana, hasta sobre lo que pudiera la autoridad religiosa vindicar para su jurisdicción, y eliminará sistemáticamente de la vida civil a todo poder, y al ejercicio del mismo, que intente, ni aun en nombre de Dios, regular la vida religiosa de hombres y pueblos.

«La Ley de matrimonio civil y la consiguiente defensa del matrimonio canónico por parte de la Iglesia, no es mas que un episodio que deriva de estas distintas posiciones doctrinales...»

El Dr. GOMA concluía su exposición doctrinal haciendo un llamamiento a sus diocesanos a fin de que cumplieran las leyes de los hombres siempre y cuando no fueran contrarias a la ley de Dios, y a fin de completar sus enseñanzas con el objeto de que guardaran la doctrina de la iglesia "y las cristianísimas costumbres de nuestra tierra en el sacramento del matrimonio", sin dejar de cumplir las disposiciones dictadas por el poder civil en lo que fueran compatibles con las eclesiásticas, pasaba a dictar una serie de normas que resumía en doce apartados:

Primero. La cuestión de mayor urgencia era la instrucción del pueblo a fin de "evitar errores, de doctrina y procedimiento, a que podría dar lugar la aplicación de la Ley de matrimonio civil". A esta función debían dedicarse singularmente los encargados de la cura de almas en el catecismo de adultos y homilias o mediante cursillos que trataran del programa que detallaba: "Naturaleza del matrimonio.- Su caracter religioso y sacramental.- Sus propiedades, unidad e indisolubilidad.- El poder de régimen del matrimonio y atribuciones respectivas de la Iglesia y del poder civil en el de los bautizados.- Impedimentos, constitución y dispensa.- Deberes." Debiendo los sacerdotes insistir especialmente en el caracter sacramental de la institución.

Segundo. Los sacerdotes deberían disuadir a los fieles de pretender dispensas de impedimentos de consanguinidad, a no ser que mediaran causas graves. Todo ello a fin de salvaguardar "la honestidad de la familia, el trato digno y decoroso entre parientes, la pureza de costumbres y otros no pequeños bienes para los esposos, para los hijos y para la

sociedad doméstica y aun civil...", toda vez que de ello podían derivarse "graves peligros, aun físicos, para los hijos y descendientes que, como advierte la ciencia médica, heredan frecuentemente agravados los defectos y vicios así físicos como morales de los padres."

Tercero. Una vez estuviera en vigor la nueva ley convenía que los católicos cumplieran las formalidades civiles exigidas por ella, bien entendido que ello no equivalía a contraer matrimonio.

Cuarto y quinto. A tal fin aconsejaba que los párrocos exhortasen el cumplimiento de tales disposiciones, debiendo consultar en todo caso de duda al ordinario. Debía procurarse así que, tras el acto sacramental, los esposos comparecieran en el juzgado para la ceremonia civil, por lo que era conveniente que la ceremonia religiosa se celebrara por la mañana.

Sexto. En el caso de que se pretendiera celebrar la ceremonia civil antes de la religiosa, los fieles debían tener bien claro que no podían hacer vida marital sin caer en grave pecado, por lo que, si persistían en tal actitud, serían excluidos de la recepción de sacramentos y otros bienes religiosos, "considerándose sus hijos canónicamente ilegítimos e irregulares, y privados, los que así procedieren, de sepultura eclesiástica, si antes de la muerte no dieran señales de arrepentimiento..."

Séptimo. Si alguien contrajera matrimonio civil antes que el canónico y transcurrido un plazo, aunque fuera de días, quisiera legitimar su unión ante la Iglesia, debía acudir en cada caso al ordinario para que resolviera. En el caso de que los solo casados civilmente quisieran bautizar a sus hijos se procedería a efectuarlo, pero haciendo constar en la partida bautismal tal condición de los padres.

Octavo. Los que, en grave hipótesis, se atrevieran a contraer matrimonio civil siendo ordenados *in sacris* incurrirían en las correspondientes penas canónicas.

Noveno. Debía tenerse en cuenta la nueva condición de los mayores de edad, a quienes la nueva ley no exigía el consentimiento paterno. En consecuencia, a los mayores de veintitrés años en la diócesis, según el Código y las leyes forales aplicables, no se les exigiría tal consentimiento, siendo, no obstante, aconsejable que los contrayentes procedieran de acuerdo con el consejo y bendición de sus padres.

Decimo. Para el caso de los menores de edad debía tenerse en cuenta que el Código canónico requería la licencia de los padres, debiendo exhortarse, pues, a los contrayentes a que no celebraran el matrimonio sin tal consentimiento y acudiéndose al ordinario en el caso de que la oposición paterna se estimara irracional.

Undécimo y duodécimo. No se precisaba documentación de cumplimiento militar; debiendo, por último, en todo lo demás, observarse escrupulosamente las disposiciones del Código canónico.

Finalizaba el prelado exhortando a sus sacerdotes para que, a tenor de las normas dadas, instruyeran a los fieles con sencillez y claridad, de acuerdo con las circunstancias del auditorio, toda vez que peligraba "el tesoro de fe y de santísimas costumbres que nos legaron nuestros mayores", debiendo así adiestrarse "cada día más en las nuevas formas de combate que los tiempos nos exigen" y procurar un conocimiento cada vez mayor por parte del pueblo de las cosas divinas de la religión que, "durante siglos, han sido el

sostén de sus virtudes."**)

El Dr. FRUTOS VALIENTE, tras hablar de la doctrina de la Iglesia sobre el carácter sacramental e indisoluble del matrimonio, hacia las siguientes advertencias a sus fieles, que, como vemos, aun conteniendo logicamente la misma doctrina, tenían una expresión mas dura que las comprensivas normas dadas por el obispo GOMA:

"A) En ningún caso, ni antes de contraer el santo matrimonio canonico, ni menos todavia despues, pueden los catolicos (por referirnos nada más a estos) celebrar ante el Juez o Magistrado civil la ceremonia llamada "matrimonio civil", con intención de celebrar verdadero y valido matrimonio; (***) cometiendo si tal intención formaren un gravisimo pecado mortal.

"B) En ningún caso, si por motivo insuperable celebrasen los catolicos la dicha ceremonia civil ante el Juez o Magistrado civil antes de contraer el Sacramento del Matrimonio (Sacramento y Matrimonio que entre bautizados son una sola y misma cosa), (***) en ningún caso de estos, repetimos, pueden lícitamente hacer vida común conyugal, o acto de esta vida relativo a los fines matrimoniales, hasta que celebren o contraigan el mencionado Sacramento Matrimonio; cometiendo de lo contrario pecado mortal.

"C) Si algunos, a sabiendas y libremente, celebrada la ceremonia civil, no contrajesen matrimonio canonico, y contentandose con solo aquella viviesen como casados y fuese esto notorio y público, los que así procedieren deberán ser, a tenor de los sagrados cánones, privados de sacramentos, tenidos por inhabiles para pertenecer a Asociaciones religiosas, afectados por el impedimento dirimente de 'publica honestidad', excluidos del oficio de padrinos y de todo cargo honorífico en la Iglesia; privada, ademas, la

(49) 29 de julio de 1932, "Instrucción Pastoral.- La Ley sobre el Matrimonio civil", BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de julio de 1932, núm. 712, págs. 463-484.

(50) En bastardilla en el original.

mujer de la bendición *post partum*;⁽¹⁾ tenidos los hijos habidos en semejante unión pecaminosa por canónicamente ilegítimos e irregulares; y habiéndose de negar a los que así se condujeron, si antes de morir no hubiesen dado señal alguna de arrepentimiento, la sepultura eclesiástica.

«D) Obligados vienen los católicos a celebrar el Sacramento del matrimonio antes de comparecer ante el Juez o Magistrado civil para la ceremonia civil.⁽²⁾ Siendo convenientísimo que, anticipado el Sacramento y formada para la ceremonia civil la intención de llenar un rito meramente legal en orden a los puros efectos civiles,⁽³⁾ se hagan las dos cosas en el mismo día.

«E) Sepan los católicos que la comparecencia, con la intención y en la forma que en el anterior les exhortamos y mandamos, a la ceremonia civil, no solo es lícita, sino por derecho natural y canónico obligatoria, en evitación de penas o vejaciones, por el bien de la prole, si Dios quiere concederla, y para prevenir el peligro y subsiguientes daños de la poligamia. Por estas mismas razones, ni los fieles deben pretender el Sacramento del Matrimonio sin asistir inmediatamente después a la ceremonia civil, ni los párrocos autorizar la celebración de aquel si no les consta que están capacitados los pretendientes para la dicha ceremonia y que la tienen preparada y tramitada, fuera de caso raro y por razones verdaderamente graves, en que jamás se ha de proceder sin contar con el Ordinario:

«F) Para mayor garantía del vínculo sacramental en orden a los efectos puramente externos y sociales, y con el fin justísimo de prevenir que, por omisión de la ceremonia ante el Juez o Magistrado, la malicia de un cónyuge pueda mañana dañar gravemente al otro, abandonándolo y atentando el llamado 'matrimonio civil', con otra persona, a la cual el Estado reconocería los derechos civiles, aconsejamos a los venerables párrocos y delegados de estos que no asistan a la celebración de ningún matrimonio canónico ni lo bendigan, sin que los contrayentes se comprometan por escrito, que firmen y rubriquen ellos y dos testigos, a presentar en plazo de ocho días declaración o testimonio de haberse realizado la ceremonia civil.

(1) En bastardilla en el original.

«G) Si por alguna muy grave causa los pretendientes al santo matrimonio hubiesen comparecido para la ceremonia civil antes de celebrar aquel,⁽⁵²⁾ deberán a continuación, inmediatamente, celebrar el dicho matrimonio: De lo contrario, habrán de contar los venerables párrocos o ecónomos en cada caso con el Ordinario.»⁽⁵³⁾

Un caso singular entre los analizados sería el del obispo de Zamora, Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA, que el 23 de julio suscribió una pastoral destinada al clero de su diócesis con todo su texto en latín, quizá para que no trascendiera más allá de sus destinatarios, aunque la doctrina en ella expuesta, si bien mucho más resumidamente, no difería de la que tratada por los anteriores prelados: el matrimonio era la base de la sociedad y sobre él solo la Iglesia tenía plena jurisdicción; en contra de esta verdad la nueva ley reconocía como único matrimonio el civil, derogaba los impedimentos matrimoniales y, lo que era un absurdo jurídico, establecía como únicos competentes para conocer de todas las causas matrimoniales a los tribunales civiles. Ante tales hechos misión de los sacerdotes era mantener íntegra la doctrina católica sobre el matrimonio entre los fieles y recordarles que tan solo la Iglesia era competente para celebrar matrimonios entre cristianos, fijar los impedimentos matrimoniales y dictar sentencias sobre las causas habidas entre cónyuges, toda vez que el matrimonio cristiano había sido instituido como sacramento por Cristo, no pudiendo, pues, disociarse, en el realizado entre cristianos, la parte sacramental de la meramente contractual.

(52) En bastardilla en el original.

(53) 25 de julio de 1932, "Doctrina y advertencias sobre el matrimonio", BOE de Salamanca, año 79, 1 de agosto de 1932, núm. 9, págs. 187-197. Reproducido por el BOE de Granada, año 88, 15 de agosto de 1932, núm. 3057, págs. 210-213.

Ante la inminente entrada en vigor de la nueva ley debían los párrocos redoblar su celo pastoral y explicar a los fieles el alcance que para ellos podía tener el matrimonio civil obligatorio que la norma prescribía, y dejar bien claro que la mera celebración de este no tenía más significación para la vida en común que el concubinato; de ahí la necesidad de que la ceremonia civil se realizara después que la canónica, debiendo recurrirse al ordinario en cada caso si existía alguna razón que impidiera efectuarlo así, bien entendido que, en el caso de celebración del matrimonio civil antes que al canónico, los contrayentes debían vivir separados hasta que aquél tuviera lugar. Si tal no hacían, si rechazaban el matrimonio canónico y sólo se unían por el civil, siendo su vida marital pública y notoria, debían quedar excluidos de la recepción de los sacramentos, de los actos legítimos eclesiásticos y pasaba a originarse el llamado impedimento dirimente de pública honestidad, quedando también excluida la mujer de la bendición *post partum*, siendo los hijos habidos en el matrimonio ilegítimos e irregulares y no pudiendo concederse sepultura eclesiástica a quienes no se hubieran arrepentido de tal unión civil.

Hablaba seguidamente el prelado del consentimiento paterno en los casos de menores de veintiún años y de los mayores de dicha edad; recalcaba la exclusiva competencia de los tribunales eclesiásticos para pronunciarse sobre las causas matrimoniales, de forma que nadie que hubiera obtenido una nulidad de su unión canónica ante un tribunal civil podía volver a casarse y finalizaba refiriéndose a la participación de los jueces y funcionarios católicos en las ceremonias civiles. (54)

(54) 23 de julio de 1932, "Instructio Pastoralis", BOE de Zamora, año 69, 30 de julio de 1932, núm. 9, págs. 201-205. Incluimos el texto en latín de la pastoral en el apéndice núm. 9.

La forma dada en su pastoral por el obispo de Ávila, si bien, lógicamente, contenía la misma doctrina, era más ponderada que las suscritas tanto por el Dr. ARCE OCHOTORENA, como por el Dr. FRUJOS VALIENTE, si bien no dejaba de reiterar en ella los preceptos canónicos aplicables a los que vivían públicamente bajo el único enlace civil:

"... En el foro de la conciencia, para el católico, no hay verdadero matrimonio más que el sacramento; toda vida marital fuera del sacramento contraído es pecado; y el que en tal forma vive públicamente no puede ser admitido a la recepción de la Sagrada Eucaristía, sin arrepentirse y enmendarse públicamente; ni formar parte de ninguna asociación religiosa; ni ejercer el oficio de padrino en los sacramentos de bautismo y confirmación o cualquier otro acto legítimo eclesialístico; ni recibir sepultura eclesialística ni la aplicación de sufragios públicos. Tampoco podría la mujer que solo se casase civilmente recibir la bendición post partum.

«Igualmente siendo el matrimonio canónico un sacramento, es absolutamente indisoluble según su divina institución si ha sido válidamente contraído y consumado; y en el foro de la conciencia todo católico en cuanto a los impedimentos y en cuanto a las causas matrimoniales ha de atenerse a la doctrina y a la autoridad de la Iglesia; siendo evidente que la variación de los impedimentos matrimoniales para el matrimonio civil no tiene cuenta para el sacramento del matrimonio.

«Reconociendo en adelante la ley civil española efectos civiles solo al matrimonio civil deberán los católicos abstenerse de contraer este. Lo que la Iglesia condena en los fieles católicos es que contraigan solo el matrimonio civil o que lo contraigan antes que el matrimonio canónico, pero no impide que para lograr los efectos civiles, para procurar el bien de la prole y evitar el peligro de la poligamia, después de contraído el matrimonio canónico se presenten al Juez municipal con la intención de celebrar la ceremonia civil, antes al contrario, esto es oportuno y conveniente, cuando desgraciadamente un Estado no reconoce efectos civiles al matrimonio canónico.

«Siendo un deber de todos los buenos católicos el procurar por los medios legales que a su tiempo vuelvan también en nuestra católica España a ser reconocidos efectos civiles al matrimonio canónico, mientras tanto todo católico que quiera portarse como fiel hijo de la Iglesia y no caer en pecado, en el foro de la conciencia debe observar la doctrina y disciplina de la misma en cuanto al santo Sacramento del Matrimonio, único que puede procurar a los consortes las gracias tan necesarias a su estado para su mutua fidelidad y la cristiana educación de los hijos.»

A continuación de su pastoral también dictaría el prelado unas normas a sus sacerdotes que no eran más que repetición, con escasas variaciones de las ya vistas de los demás prelados y que hacían referencia a la cuestión del consentimiento paterno tanto para los contrayentes mayores como menores de edad; a la de la ley de soltería; intervención del juez municipal en el matrimonio civil; la conveniencia de celebrar la ceremonia civil tras la canónica; las penas canónicas en que incurrían los que solo se casaran civilmente; la inscripción del bautismo de hijos de tales parejas y el matrimonio canónico de los que durante un tiempo hubieran estado casados solo civilmente. Tan solo un caso nuevo contemplaba el Dr. PLA Y DENIEL: la posibilidad de contraer matrimonio canónico los que no pudieran celebrarlo civil y, por otra parte, desarrollaba con mayor detalle la cuestión llamada de "pública honestidad".

Respecto al matrimonio canónico de los que tuvieran impedimento para celebrar la ceremonia civil destacaba el Dr. PLA Y DENIEL que la nueva ley civil fijaba menos impedimentos que los hasta entonces contemplados en el Código civil y en el de derecho canónico, mas podría darse el caso de que "uno que estuviese casado solo civilmente y no divorciado quisiese casarse con otro, con el cual pudiese casarse canónica, pero no civilmente", en tal caso y otros

análogos que pudieran darse los parrocos antes de proceder al matrimonio debían consultar con el ordinario.

Y respecto al impedimento de pública honestidad recordaba que este era la unión en matrimonio civil y la pública vida marital, que hacía "público y notorio" el concubinato, lo que daba origen al impedimento que dirimía "el matrimonio en el primer y segundo grado de línea recta entre el varón y las consanguíneas de la mujer y viceversa."⁽⁵⁵⁾

Y por su parte el obispo de Madrid-Alcalá, Dr. BIJO Y GARAY en las normas dadas a sus sacerdotes insistía en la necesidad, hasta el punto de negar el matrimonio canónico en caso contrario, de que los fieles se comprometieran a unirse también por ceremonia civil, recordando igualmente las penas canónicas de quienes tan solo se unían por lo civil:

"La 'Gaceta de Madrid' del día 3 del corriente mes de julio publica una ley dada por las Cortes Constituyentes, acerca del Matrimonio Civil, cuyo artículo 1º dice así: 'A partir de la vigencia de la presente Ley (o sea desde el día 3 del próximo mes de agosto) sólo se reconoce una forma de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a lo dispuesto en las secciones primera y segunda del capítulo 3º del título 4º del Libro 1º del Código Civil'.

"Esta Ley, al reconocer tan sólo una forma de matrimonio, el civil, y negar al canónico los efectos civiles que hasta ahora se le venían reconociendo, crea una nueva situación legal. Acerca de ella hemos creído necesario dar las siguientes normas prácticas que el venerable Clero procurará divulgar entre los fieles.

"1ª. Los párrocos enseñarán a los fieles, con la mayor solícitud posible, que entre cristianos no puede darse verdadero matrimonio, sin que al par

(55) 30 de julio de 1932, "Instrucción Pastoral" y "Normas al clero diocesano sobre la celebración del sacramento del matrimonio y cuestiones conexas después de la nueva ley del matrimonio civil", BDE de Avila, año 43, 30 de julio de 1932, núm. 7, págs. 304-318 y 335-337.

sea sacramento; de suerte que si alguno de ellos presumiese contraer matrimonio que ante la conciencia cristiana sea verdadero y valido, con la sola ceremonia civil, incurriria en gravisimo error, contrario a la fe que los catolicos profesamos. Mas una vez que la Potestad civil, a la cual compete regular por medio de sus leyes los efectos puramente civiles del matrimonio, decreta la necesidad de una *ceremonia meramente civil**** para lograr aquellos efectos; considerada como mera ceremonia extrinseca para llenar las formalidades exigidas por la ley civil y que goce el matrimonio de los efectos civiles, no solo es licita, sino obligatoria, y no se podra omitir sin incurrir los contrayentes en la responsabilidad a que darian lugar los graves perjuicios que de aquella omision se seguirian no solo para los conyuges, sino tambien para los hijos si los hubiese. Por esta razon, los parrocos ensenaran a los fieles que no deberan conformarse con contraer el matrimonio canonico, sino que han de procurar, con el solo objeto de lograr los efectos civiles, realizar a continuacion del mismo la ceremonia civil impuesta por la nueva ley. A este fin mandamos que, sin nuestra autorizacion, no sean admitidos al matrimonio canonico los que no puedan o no quieran celebrar la ceremonia civil.*** (Instruccion de la S. Penitenciaria a los Obispos de Italia, 15 de enero 1886; S.C. pro Neg. Extraord. a los Obispos de la Argentina, 20 de febrero de 1889, y S.C. de Sacramentos 30 de junio de 1917).

«24. Si en algun caso se celebrara la ceremonia civil antes que el matrimonio canonico, han de saber los fieles que pecan mortalmente si hacen vida marital antes de celebrar el verdadero matrimonio sacramento; y que si a sabiendas y voluntariamente los contrayentes catolicos omitiesen el matrimonio canonico y se contentasen con la sola ceremonia civil, y esto se hiciese publico, serian a tenor de los sagrados canones privados de sacramentos; inhabiles para pertenecer a asociaciones religiosas; sujetos al impedimento dirimente "de publica honestidad"; apartados del oficio de padrinos y de todos los cargos honorificos de la Iglesia; de la bendicion post partum*** para la mujer; los hijos habidos de tal union serian canonicamente ilegítimos e irregulares; y por ultimo, los asi casados, si muriesen sin dar señales de arrepentimiento,

serian privados de sepultura eclesiástica.

«32. Como quiera que en caso de haber contraído solamente el matrimonio canónico y omitido la ceremonia civil, un cónyuge podría con impunidad civil abandonar al otro cónyuge y pasar a segundas nupcias civiles, para impedir esto y como defensa del vínculo del matrimonio sacramento, los Parrocos y Notarios eclesiásticos se cercioraran de que al mismo tiempo que se tramita el expediente matrimonial canónico se tramita también en el Juzgado el expediente necesario para la ceremonia civil.»»

3.2. El documento colectivo de 25 de julio de 1932 y las normas para la provincia eclesiástica tarraconense.

Fue precisamente la publicidad dada por la prensa católica a estas normas del obispado de Madrid-Alcalá (el boletín eclesiástico de Mallorca indicaba que las había tomado de "El Siglo Futuro" del 25 de julio, es decir, antes de la publicación del boletín eclesiástico de la diócesis matritense que, al menos por la fecha que en él consta, correspondía al 1 de agosto), lo que hizo crecer la urgencia del documento colectivo, a fin de dar la debida uniformidad tanto a las instrucciones a los rieleles como, sobre todo, a los distintos matices de dureza o suavidad con que se iban impartiendo. Por ello, y al objeto de dar mayor celeridad a su aparición, esta vez VIDAL no tenía intención de enviar previamente el documento a todo el episcopado, sino tan solo a los metropolitanos para de evitar que, como había sucedido con el documento colectivo de diciembre, se comenzaran a recibir observaciones, muchas de ellas de simple redacción;

(57) 20 de julio de 1932, "Normas para la transición del Expediente matrimonial a partir del día 3 del próximo mes de Agosto", BOE de Madrid-Alcalá, año 47, 1 de agosto de 1932, núm. 1564, págs. 261-271. Reproducidas por el BOE de Mallorca, año 72, 31 de julio de 1932, núm. 16, págs. 366-369, por el de Tenerife, 1932, julio y agosto, núm. 7 y 8, págs. 69-73 y por el de Pamplona, año 71, 15 de agosto de 1932, núm. 1739, págs. 250-251.

sin embargo las galeradas fueron remitidas por error por el Dr. BURRAS el día 30 de julio tanto a todos los metropolitanos como a sus sufragáneos."''

Indican BAILLURI y ARBELLOA que como los cardenales VIDAL e ILUNDAIN ya habían tratado en Roma sobre esta nueva carta de los metropolitanos y ya allí habían recibido las oportunas orientaciones, el arzobispo de Saragosa creyó conveniente en esta ocasión no hacer intervenir tampoco al nuncio, "quizas para evitar sus injerencias... y nuevos retrasos en su publicación, y quizas tambien porque le debio disgustar que en un asunto tan importante, en el que convenia una cierta uniformidad de todos los prelados, EDESCHINI se hubiera dirigido directamente a todos los obispos para comunicaries el deseo del santo padre de que instruyesen a sus fieles sobre el matrimonio civil sin consultar antes con los dos cardenales que constituian el Ufficio di presidenza de todo el episcopado... VIDAL no solo no envio galeradas a EDESCHINI, sino que al contestarle tres cartas el 3 de agosto, no le hizo alusión alguna al documento en curso. El nuncio debio de leerlo en los periódicos o en los boletines diocesanos."''

Si el cardenal queria evitar una injerencia de la nunciatura que pudiera retardar la actuacion del episcopado queria, en la misma linea, dar la la mayor claridad y efectividad politica a esta. Por ello, el 4 de agosto remitiria, como habia hecho con el precedente documento colectivo, las galeradas de la nueva carta a AZANA, indicandole que en ella se hacia "la defensa de la tesis catolica, pero procurando la harmonia siempre que sea posible". tambien las remitiria al día siguiente a ALCALÁ

(58) *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, pág. 32.

(59) *Ibidem*.

ZAMORA.

El documento iba firmado por los metropolitanos, no por todo el episcopado como en las precedentes ocasiones, y sería publicado en todos los boletines eclesiasticos a lo largo del mes de agosto y principios de septiembre. Sin embargo no iba a tener el cauce debido hacia la opinion publica y el conocimiento general de los creyentes, ya que por los sucesos del 10 de agosto serian suspendidos los periodicos de derechas, no teniendo, asi, opcion a la publicacion y difusion de la nueva carta del episcopado.

Constaba esta de tres capitulos o apartados, el primero recogia la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, transcribia los canones aplicables a esta institucion y señalaba como en la enciclica *Casti Connubii* el papa acababa de reiterar esta doctrina. El segundo daba once normas a los fieles que trataban del matrimonio canonico como unico valido; de la conducta que debia observarse ante el matrimonio civil, de la autoridad competente para las causas de separacion y nulidad en los procesos de divorcio, de los deberes de abogados, jueces y funcionarios catolicos y de la actitud de los fieles y de las penas canonicas para los violadores de la legislacion de la Iglesia. El tercero contenia una exaltacion del matrimonio cristiano asi como una exhortacion a los parrocos y encargados de la cura de almas para que enseñaran claramente a los fieles la doctrina eclesiastica sobre el estado conyugal.

Dado que su contenido seguia, como es obvio, la postura que hasta aqui hemos visto mantenida por los distintos prelados, si bien con diferencias de matiz, singularmente en la mesura de su redaccion, limitandose toda la primera parte del documento a transcribir la doctrina pontificia y los

canones del Código de derecho canónico aplicables a la institución matrimonial, transcribimos su texto íntegro en el apéndice correspondiente limitándonos a señalar aquí lo que no había sido en absoluto tratado por el episcopado y que era, desde luego, una postura en extremo novedosa: la posibilidad de los católicos de plantear las causas de separación matrimonial -únicas posibles entre ellos como había dejado reiterada y claramente expuesto la jerarquía- tan solo ante los tribunales civiles siempre que las causas a alegar pudieran haber sido también alegadas como causas de separación canónica, si bien no dejando ello a su conciencia sino a la previa investigación por parte del ordinario. Novedad introducida, al parecer, por propuesta formulada directamente por el cardenal ILUNDAIN a Roma. (11)

Así, tras establecer en la norma quinta que no era lícita la separación, temporal o perpetua, sin autorización del ordinario y que de estas causas y de las de nulidad matrimonial o dispensa de matrimonio rato y no consumado, solo eran competentes los tribunales eclesiásticos, añadía la norma sexta esta positiva, y, a juzgar por lo dicho por "El Debate" en el mes de noviembre pasado, novedosa previsión:

"64. Aun quedando en todo su vigor y firmeza lo declarado en el número precedente, en atención a que, cuando existe causa canónica de separación, los católicos tienen derecho a los efectos civiles de ella dimanantes, seguridad de las personas, debida tutela de los intereses materiales y educación, manutención y bien de la prole, la Iglesia no es contraria a tolerar que los fieles utilicen las leyes civiles para obtener dichos

(61) Destacan BAILLORI y ARBELLOA, tanto el sentido pastoral del cardenal ILUNDAIN ante esta propuesta como el hecho de que la República también cedería en parte por la ley adicional de 11 de septiembre de 1932, que establecería que los procedimientos en tramitación en los tribunales eclesiásticos, que hubieran sido iniciados antes de entrar en vigor la nueva ley, "podían ser sometidos a la aprobación de los tribunales civiles, sin incoar nueva causa". (Op. cit., III, págs. 28 y 48). Dado que la propuesta del cardenal de Sevilla había sido hecha, al parecer, por carta al Vaticano de 22 de mayo de 1932, no cabe duda que la Iglesia quiso dar solución a este tema mucho antes de que lo hiciera el gobierno. (Ver el texto de la ley citada en el apéndice núm. 10).

efectos, cuidando, empero, con suma diligencia, que ello no implique tibieza en la firme adhesión debida a la doctrina católica, ni mengua alguna en su deber de atenerse a la disciplina eclesiástica y de procurar, para bien de la religión y de la patria que sean abrogadas las leyes contrarias a la santidad del matrimonio, y respetados a la Iglesia los derechos que por ley divina le competen.

«Por tanto, y a fin de evitar a los fieles el dispendio de tiempo y los mayores gastos que un doble proceso judicial en la forma ordinaria importaría, mientras la Santa Sede no disponga algo en contrario, se tolera que aquellos puedan introducir la causa de mera separación ante los tribunales civiles, con tal que obtengan previamente la autorización o licencia del ordinario propio, quien, para concederla, deberá cerciorarse, mediante información sumaria, de que existe causa canónica para la separación.

«Cuando la especial gravedad o índole del caso exigiere un trámite urgente para obtener la necesaria seguridad de las personas y de los bienes, deberán los fieles exponerlo reservadamente al Ordinario, quien, una vez atendida de momento la gravísima y urgente necesidad les señalara un plazo prudencial para que se instruya la previa información sumaria de que se ha hecho mérito.»

No obstante esta regla general, respecto a la que cabe suponer que todos los católicos que pretendieran la separación se acogerían al plazo de información previsto en el último punto, se contemplaba también el caso de aquellos fieles a los que su conciencia impulsara a tramitar la separación por las dos vías, eclesiástica y civil, existentes, fieles a los que se primaba con un especial tratamiento por parte de la Iglesia, previniéndose, incluso, para que nadie pudiera alegar nada en contra de la duplicidad de juicios, que, en el caso de la jurisdicción eclesiástica, el proceso pudiera ser gratuito, con lo que venía a resultar que ningún fiel tenía, así, excusa fundada, salvo la muy relevante en este tipo de causas del "dispendio de tiempo", para no seguirlo:

"No obstante la tolerancia otorgada, sera digna de grande aprecio y alabanza la conducta de aquellos fieles que, bien percatados de la eficacia de la disciplina eclesiastica aun para la mayor prosperidad de la sociedad civil y defensa del bien conyugal y familiar, den mas acendrada prueba de respeto y acatamiento a la autoridad de la Iglesia, simultaneando los procesos o pleitos de mera separacion ante los tribunales eclesiasticos y civiles, y todavia mejor, procurando, en cuanto fuese hacederro, que la decision eclesiastica sirva para su conciencia de guia segura en la prosecucion del pleito civil.

"Por su parte los Ordinarios pondran su mayor interes en facilitar a los fieles este proceder ejemplar, asegurando que la tramitacion de la Curia sea lo mas rapida posible, y aceptando que las costas de los juicios ante la misma ventilados sean abonados solamente por aquellos que buenamente quieran o puedan satisfacerlas."...

Sobre el documento colectivo se habian pronunciado principalmente, en el tiempo de su elaboracion, dado el error de envio de galeras a que antes hemos hecho referencia, el cardenal ILUNDAIN y el obispo de Avila, Dr. PLA Y DENIEL. El primero, segun manifestaba en su carta al arzobispo de Tarragona de 22 de julio, hubiera querido que al hablar de la posibilidad de los catolicos de interponer causas de mera separacion ante los tribunales civiles con tal que obtuvieran previamente la autorizacion o licencia del ordinario propio, se hiciera constar que habrian de prometer "no tener intencion de atentar contra el vinculo, y que jamas pretenderian tal cosa."... Por su parte el obispo de Avila hubiera deseado que en el documento se dijera mas claramente que el matrimonio canonico debia preceder al civil, tal como

(62) IRIBARREN, Jesus, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, págs. 181-189, tambien en *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, págs. 514-522. Ver el apendice núm. II.

(63) *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, págs. 141-142.

él había establecido claramente en las normas dadas a su clero⁽⁶⁴⁾ y, en cambio, consideraba que era demasiado rígida, por su amplitud, la expresión de que los católicos que incumplieran la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio "no podrán intervenir en actos religiosos."⁽⁶⁵⁾ Pero estas sugerencias, bien porque VIDAL no creyera oportuno introducirlas -caso de las del Dr. ILUNDAIN, pues el punto que él deseaba modificar había sido elaborado, precisamente, en Roma- bien porque no llegaran a tiempo, no fueron incorporadas.

También recibiría el cardenal VIDAL el 11 de agosto, es decir, cuando ya había sido publicado el documento, una carta del Secretario de Estado vaticano (el cardenal le había remitido el borrador el 8 de julio y una nueva redacción de los puntos sexto y séptimo el día 20 del mismo mes, escribiéndole nuevamente el día 2 de agosto en una carta en la que le expresaba que había recibido la conformidad de casi todos los metropolitanos y que, al no tener noticias de la Santa Sede entendía que no tenía ninguna observación que hacer) en la que PACELLI le hacía ligeras observaciones sobre el punto sexto, las cuales, por ser sobre matices del mismo, no hubieran modificado su contenido.⁽⁶⁶⁾

(64) Ver la nota núm. 55.

(65) *Església i Estat durant la segona...*, III, págs. 174-176. Sobre este punto también se pronunciaría posteriormente el cardenal ILUNDAIN en carta a VIDAL de 4 de agosto, aconsejando también la incorporación de otras normas a los fieles que consideraba conveniente recoger en el documento colectivo y que eran reflejo de las ya publicadas por los obispos a que hemos aludido.

(66) *Op. cit.*, III, págs. 104-108, 137-138, 165 y 183. Por carta de 30 de octubre remitiría el arzobispo de Tarragona al cardenal PACELLI un ejemplar del boletín eclesialístico de la diócesis con el texto definitivo, indicándole que su carta había llegado diez días después de la publicación del documento, cosa que los prelados y fieles urgían. (*Op. cit.*, págs. 290-292).

El primer boletín en que apareció publicada la carta colectiva fue en el de Tarragona de 1 de agosto⁽⁶⁷⁾, llevaba fecha de 25 de julio e iba seguido de unas "Normas particulares a los Parrocos de la Provincia Tarraconense", reproducidas igualmente en los demás boletines eclesiásticos de las diócesis sufragáneas.⁽⁶⁸⁾

Dichas normas, que se habían elaborado por prestigiosos canonistas e iban firmadas por el cardenal y todos los obispos de la provincia eclesiástica, hacían referencia a la derogación tácita de la legislación concordada como consecuencia de las múltiples disposiciones del nuevo régimen contrarias a los derechos de la Iglesia; motivo por el que la disciplina eclesiástica en España debía pasar a regularse totalmente por el derecho común, es decir, por el Código de derecho canónico, y, concretamente, en materia matrimonial, debían tenerse por derogadas todas las disposiciones anteriores del poder civil sobre el matrimonio canónico, el cual quedaba sin efectos civiles de ninguna clase. Como consecuencia de ello variaban desde aquel momento una serie de prácticas anteriormente exigidas para la celebración del matrimonio canónico (previo aviso al juzgado municipal; actas de consentimiento paterno; edad de los contrayentes; situación de servicio militar, etc.), informándose a los parrocos como debían actuar respecto a ellas en lo sucesivo.⁽⁶⁹⁾

(67) BOE de Tarragona, año 46, 1 de agosto de 1932, núm. 39, págs. 349-369. Aunque el boletín lleva fecha de 1 de agosto, no aparecía, sin embargo hasta el día 10, (*Església i Estat durant la segona...*, III, págs. 164-165, nota 4).

(68) BOE de Urgel, año 77, 2 de agosto de 1932, núm. 11, págs. 158-160; BOE de Barcelona, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 15, págs. 315-317; BOE de Tortosa, año 74, 20 de agosto de 1932, núm. 14, págs. 119-121 y BOE de Vich, año 78, 31 de agosto de 1932, núm. 2104, págs. 224-226.

(69) Ver el apéndice núm. 12.

Con independencia de estas normas se dieron otras mas reservadas de las que Batllori y Arbeloa señalan que, por este caracter, no fueron publicadas, normas que, desarrollando el punto segundo del documento colectivo, tendian a armonizar la legislacion canonica con la practica de los requisitos civiles ahora exigidos a los catolicos y, en este sentido, orientaban a los parrocos sobre la forma en que debian instruir y aconsejar a los fieles respecto a la celebracion del matrimonio civil.⁽⁷⁰⁾

Sobre estas "normas reservadas" es relevante aludir a la carta que el Dr. Fidel GARCIA MARTINEZ, obispo de Calahorra y La Calzada, habia enviado al cardenal VIDAL el 1 de agosto. Ya el documento colectivo habia aconsejado, como hemos expuesto, la celebracion del matrimonio civil; pero las "normas reservadas" iban a desarrollar este punto, siguiendo las palabras que ya hemos visto en pluma de otros prelados, de una forma mas expeditiva y, asi, hablaban del

(70) "Para instruir y aconsejar a los fieles respecto de la celebracion del acto o ceremonia civil, que establece la Ley de 28 de Junio del presente año, los Párrocos se atenderán a las instrucciones de los Rdoes. Metropolitanos de 25 de julio último, a las Normas particulares dictadas por los Prelados de esta provincia y a las reservadas que siguen a continuación:

a) Sea cual fuere el sentido objetivo del texto legal, los católicos deben considerar dicho acto, no como verdadero matrimonio, sino puramente como una formalidad externa, que debe cumplirse para que tenga efectos civiles el matrimonio canónico, unico verdadero entre cristianos.

b) En este sentido, no sólo es lícito sino muy conveniente, que se cumpla aquel requisito, para evitar los perjuicios que, a los mismos cónyuges y a sus hijos, ocasionaria el hecho de que su matrimonio no fuese civilmente reconocido.

c) En todo caso la ceremonia civil debe celebrarse *después* del matrimonio canónico, aunque sea el mismo día. Los católicos que hiciesen vida conyugal, unidos solamente por el llamado matrimonio civil, deberian ser considerados ante la Iglesia como públicos pecadores.

d) Siempre que los contrayentes no puedan efectuar el acto civil por faltar algún requisito (como en el caso de la norma 18); o sepa el Párroco que, aun pudiendo, no quieren efectuarlo, absténganse de autorizar el matrimonio sin especial licencia del Ordinario."

Aunque, como hemos indicado, Batllori y Arbeloa señalan que estas normas no fueron publicadas, las hemos encontrado incorporadas como hoja suelta al boletín eclesástico de Urgel en que se reproducian los documentos ya aludidos (1 de agosto de 1932, BOE de Urgel, año 77, 2 de agosto de 1932, núm. 11), Ver *Església i Estat durant la segona...*, III, pag. 32.

matrimonio civil como "formalidad externa, que debe cumplirse para que tenga efectos civiles el matrimonio canonico, unico valido entre cristianos", señalando que no solo era licito sino muy conveniente que se celebrara, y llegando a determinar que siempre que los contrayentes no pudieran efectuar el acto civil por faltar algun requisito o supiera el parroco que, aun pudiendo, no quisieran efectuarlo, se abstuviera este de autorizar el matrimonio canonico sin especial licencia del ordinario. Pues bien, en sentido contrario a estas determinaciones se habia manifestado, precisamente, el Dr. GARCIA MARTINEZ en la aludida carta en la que, tras señalar los peligros que podian derivarse de las distintas posturas que por parte de los miembros del episcopado se estaban adoptando en sus instrucciones a parrocos y fieles, y, de ahí, que abogara por unas instrucciones homogeneas para todas las diócesis, haciendo hincapié en el distinto consejo que cabia dar a los fieles en orden al matrimonio civil, parecia decantarse, por motivos sociológicos de no favorecer la implantacion de una costumbre ajena a la legislacion eclesiastica, porque no se recomendara a los fieles la celebracion de la ceremonia civil. Dada la importancia de esta carta en cuanto expresiva de las disparidades existentes en el episcopado español durante la Republica no nos privamos de transcribirla a continuacion:

"Por iniciativa propia, y mas elevadas indicaciones," me permito someter a la consideracion de V. Eminentisima la conveniencia de rogar a todos los Revmos. Prelados (por el modo que estime mas expedito) que aplacen la publicacion de instrucciones particulares sobre

(71) BATLLORI y ARBELLOA advierten que estas indicaciones serian probablemente del nuncio, (*Esglesia i Estat durant la segona...*, III, pag. 160, nota 7) aunque no nos explican por qué en esta ocasión, como venia sucediendo en otros temas, no contactó este directamente con el cardenal VIDAL para hacerle personalmente tales indicaciones, quizá porque habia sido su carta del 15 de julio la que habia dado lugar, al no aludir a ningunas posibles normas de carácter general, a que algunos obispos se apresuraran a dictar normas particulares para sus diócesanos.

las cuestiones del matrimonio planteadas por la nueva legislación civil sobre la materia, hasta que en las Conferencias Episcopales y de Metropolitanos se estudie el asunto, y se pueda formular una Instrucción colectiva acerca del mismo.

«Parece exigirlo así la importancia excepcional del problema, que tanto puede afectar a la futura constitución de la familia en España, y la conveniencia de evitar orientaciones divergentes, y acaso opuestas, entre los Prelados, sobre extremos de máximo interés práctico.

«Por ejemplo, ya sabe su Eminentísima que por algún Rvmo. Prelado se ha adelantado un criterio, en el sentido de imponer a los fieles la celebración o cumplimiento de la formalidad del llamado matrimonio civil.”»

«Pues bien, quizás haya prelados que se inclinarían (dada nuestra legislación constitucional, el ambiente del pueblo católico español en este particular, y la probabilidad, tal vez no infundada, de hacer fracasar el llamado matrimonio civil, con una abstención colectiva muy generalizada) a desaconsejar a los fieles el cumplimiento de dicha formalidad civil o, al menos, a dejarlos en libertad.

«La razón principal que se alega en favor del primer criterio: evitar que algún o algunos contrayentes pasen a segundas nupcias civiles adulteras, cosa, por otra parte, que (dada la mala fe y el consiguiente pretexto, que no faltaría, para el divorcio vincular, según la misma ley civil, no se hasta qué punto se lograría) tal vez quede contrapesada por la conveniencia de evitar que entre nosotros se aclimate definitivamente el matrimonio civil (disoluble por su misma ley), con el peligro consiguiente de que poco a poco, en la conciencia del pueblo, este pretendido matrimonio sea considerado como el principal y único con

(72) Indican BATLLORI y ARBELLOA que parece referirse al obispo de Madrid-Alcalá, Dr. EIJÓ Y SARAY, (*Esglesia i Estat dunt la segona...*, III, pág. 161, nota 8) cuya pastoral había sido difundida por la prensa. Como hemos visto esta postura sería la mantenida por la generalidad del episcopado con mayor o menor insistencia, pareciendo solo contrario a ella, por los juicios emitidos sobre el matrimonio civil y la legislación estatal, el obispo de Segovia en su pastoral comentada.

fuerza jurídica y moral, y el canónico vaya pasando a la categoría de pura ceremonia religiosa.

«Los intereses materiales de los esposos canónicamente, y de sus hijos, parece pueden salvarse (nuestra Constitución no distingue entre hijos legítimos e ilegítimos, y establece las mismas obligaciones de los padres respecto de los habidos dentro o fuera de matrimonio) sin necesidad de llenar la formalidad del derecho civil.

«Pero, en fin, no es mi intento ahora entrar en el fondo del asunto, sino apuntar, simplemente, la convención de que, estudiado este con la atención que merece, procedamos con uniformidad de criterio todos los Prelados.»

De esta carta se desprende la postura de fuerza que podía haber adoptado la jerarquía eclesiástica española de haber aconsejado a los católicos, la mayoría de la población, y según dejaba traslucir el Dr. Fidel GARCÍA en su carta, el hacer caso omiso de la legislación civil y efectuar únicamente el matrimonio canónico, tal como ya se había hecho en el quinquenio 1870-1875. Como hemos visto, lejos de adoptar tal postura, la jerarquía, de acuerdo con la Santa Sede, buscó la fórmula conciliadora de todos los intereses, y, bien en algunos casos reservadamente (como en la provincia eclesiástica de Larragona), bien con publicidad manifiesta, no dejó de aconsejar a los fieles, con carácter general, el cumplimiento de los requisitos que determinaba la nueva legislación civil, en parte, es cierto, por los peligros de duplicidad de matrimonio que, a pesar de lo apuntado por el obispo de Calahorra, de no realizar la ceremonia civil, podían derivarse.

3.3. Las normas dictadas por los obispos de Huesca, Vitoria y León.- Las observaciones del arzobispo de Burgos y "las consultas sobre el matrimonio civil" publicadas por el boletín eclesiástico de Calahorra y La Calzada.

Esta actitud general del episcopado, continuo, no obstante, variando de unos obispos a otros, pues se dio el caso de que, aun conociendo la existencia del documento colectivo, aunque no su redacción definitiva, siguió algun miembro del episcopado dando normas particulares a sus diocesanos no basadas en el documento, como sería el caso de Iarragona, sino con independencia de lo en él expuesto.

Tal ocurrió con Fr. Mateo COLUM y CANALS, obispo de Huesca, que publicó una circular dando normas para su diócesis un mes antes de reproducir en su boletín el documento colectivo y sin aludir a él. Tampoco harían alusión al documento los obispos de Vitoria, Dr. MUGICA, y de León, Dr. ALVAREZ MIRANDA, en sus escritos de 8 y 10 de agosto respectivamente. Los tres obispos mantendrían -a diferencia del Dr. GARCÍA MARTÍNEZ-, el consejo de celebración de la ceremonia civil, si bien seguía dándose una diversidad de matices. Así, mientras el obispo de Huesca señalaba a los parrocos que advirtieran a los fieles que "debían" acudir al juzgado para la ceremonia civil después de la celebración del matrimonio canónico, el de Vitoria señalaba que la ceremonia civil no sólo era lícita, sino, por ley general obligatoria, y el de León, por medio de su vicario general, daba simplemente por supuesto que los católicos celebrarían tal ceremonia civil, pero sin señalar la conveniencia de la misma y aludiendo únicamente al pecado

que para todo católico supondría vivir el matrimonio con esa sola ceremonia.⁽⁷⁴⁾

Con independencia de las instrucciones que por algún obispo, como los indicados, pudieran seguir dándose al margen del documento colectivo, por la coincidencia de fechas en su gestación y publicación, una vez conocido este y reproducido en todos los boletines eclesiásticos, pasaron los distintos miembros de la jerarquía a dar normas a sus fieles a tenor del contenido de aquel. Tales normas se publicarían, por regla general, a continuación de la alocución colectiva o, en algunos casos, en el boletín eclesiástico inmediatamente siguiente y venían acompañadas, en los que no lo habían publicado ya, por el texto de la ley sobre el matrimonio civil, destacando por la uniformidad en la exposición del criterio que debra darse a los fieles y, por regla general, siguiendo la línea de las instrucciones dadas por los obispos catalanes para la provincia eclesiástica de Tarragona, tanto públicas como reservadas si bien no hicieran tal distinción.⁽⁷⁵⁾

(74) s.f., "Circular del Prelado", BOE de Huesca, año 81, 1 de agosto de 1932, núm. 8, págs. 175-176 (El documento colectivo no sería publicado en esta diócesis hasta el 1 de septiembre de 1932, BOE núm. 9 págs. 199-208); 8 de agosto de 1932, "Circular núm. 136.- Instrucciones acerca del matrimonio entre católicos", BOE de Vitoria, año 68, 10 de agosto de 1932, núm. extraordinario: s.f., "Instrucciones sobre la celebración del matrimonio", BOE de León, 16 de agosto de 1932, núm. 12, págs. 275-280. Ver el apéndice núm. 13.

(75) BOE de Burgos, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 15, págs. 268-272; BOE de Santiago de Compostela, año 71, 17 de agosto de 1932, núm. 2680, págs. 274-276, BOE de Sevilla, 20 de agosto de 1932, núm. 1209, págs. 233-235; BOE de Córdoba, año 75, 23 de agosto de 1932, núm. 14, págs. 183-185 (publica las "Reglas prácticas" dadas por el arzobispo de Sevilla a los párrocos en orden a la celebración del matrimonio canónico); BOE de Iruy, 31 de agosto de 1932, núm. 13, págs. 275-277; BOE de Valencia, 1 de septiembre de 1932, núm. 2154, págs. 280-283; BOE de Palencia, 3 de septiembre de 1932, núm. 17, págs. 468-475; BOE de Mondoñedo, 5 de septiembre de 1932, núm. 17, págs. 153-157; BOE de Coria, año 67, 16 de septiembre de 1932, núm. 42, págs. 547-548; BOE de Málaga, año 65, 15 de septiembre de 1932, núm. 10, págs. 213-218; BOE de Oviedo, 15 de septiembre-1 de octubre de 1932, núm. 13, págs. 158-159; BOE de Zaragoza, año 71, 16 de septiembre de 1932, núm. 18, págs. 314-316; BOE de Pamplona, año 71, 1 de octubre de 1932, núm. 1742, págs. 293-295, (recoge las "Reglas prácticas" dictadas por el arzobispo de Zaragoza para los párrocos); BOE de Astorga, año

Al margen de estas normas, el arzobispo de Burgos publicó unas "observaciones" o comentarios a la ley sobre el matrimonio civil que ponían de relieve, con el fin de que fueran conocidas por el clero, las variaciones introducidas por la nueva disposición a la anterior legislación en la materia exclusiva de los impedimentos para contraer matrimonio y que fueron reproducidas por otros boletines eclesiásticos''' y, por su parte el obispo de Calahorra y La Calzada, no olvidando, probablemente, el contenido de la carta que había escrito al cardenal VIDAL el 1 de agosto, reproducía en su boletín eclesiástico de 12 de septiembre unas "Consultas sobre el matrimonio civil" tomadas de la revista "Sal Terrae" en las que, aconsejando, desde luego, la realización de la ceremonia civil, se daba extensa cuenta de la postura mantenida por los católicos en 1870-1875, cuando se habían negado a contraer este.'''

80, 15 de octubre de 1932, núm. 20, págs. 329-333,... En el apéndice de este capítulo recogemos, como muestras, las normas dictadas por los arzobispos de Burgos, Sevilla y Zaragoza, igualmente recogemos las del Dr. Rafael BALANZA NAVARRO, obispo de Luja y administrador apostólico de Mondoñedo, que descendió en sus normas a una casuística mayor que la expuesta por el resto del episcopado. (Ver el apéndice núm. 14).

- (76) BOE de Burgos, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 15, págs. 310-311; reproducidas, entre los consultados, por el BOE de Iruy, año 73, 22 de septiembre de 1932, núm. 16, págs. 310-311; BOE de Zaragoza, año 71, 1 de octubre de 1932, núm. 19, págs. 339-340; BOE de Barcelona, año 75, 31 de octubre de 1932, núm. 20, págs. 430-431; BOE de Vitoria, año 68, 1 de noviembre de 1932, núm. 23, pág. 590. BOE de Tarragona, año 68, 15 de noviembre de 1932, núm. 43, págs. 423-424; BOE de Gerona, año 76, 31 de diciembre de 1932, núm. 18, págs. 366-367; BOE de Valencia, 15 de enero de 1933, págs. 25-27 y 1 de abril de 1933, núm. 2168, págs. 111-112..

- (77) s.f., "Consultas sobre el matrimonio civil", BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 12 de septiembre de 1932, núm. 11, págs. 184-195.

4. La conferencia de metropolitanos de noviembre de 1932.

La última manifestación de la jerarquía española sobre las cuestiones del matrimonio civil y del divorcio durante el primer bienio de la República tuvo lugar como consecuencia de la conferencia anual de metropolitanos celebrada los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre de 1932.

En ella el tema fue incluido en el punto octavo de los nueve que habían de ser tratados y que englobaba varios problemas religioso-legales (ley de cementerios; entierros y viáticos; matrimonio; obra pía seglar del ministerio de Estado; preceptos legales sobre manifestaciones exteriores del culto; situación de la Iglesia en el aspecto fiscal o tributario; concordato y convenio y ley de capellanías de 1867). No fue, por tanto, en aquella fecha, un extremo importante para el episcopado o sobre el que este considerase necesario insistir.

Así, en el acta final de la conferencia solo aparecería un corto párrafo centrado exclusivamente en el tema del planteamiento del divorcio semipleno ante los tribunales civiles, sobre el que se remitía a unas tutoras directivas, recogiendo, además, la propuesta formulada por el cardenal ILUNDAIN de la promesa ante el ordinario de no atentar contra el vínculo matrimonial en sí y sin alusión alguna a la cuestión del matrimonio civil, cuestión que se debió considerar ya suficientemente tratada en la declaración colectiva de 25 de julio y en las subsiguientes normas particulares de los obispos:

"VIII. 3. Sin perjuicio de las normas directivas que se darán respecto del procedimiento para conceder licencia de entablar divorcio semipleno ante los tribunales civiles, se exigirá promesa ante el Ordinario de que nunca atentaran al divorcio pleno."

Pero con independencia de este acta final es de destacar también que en las comunicaciones que los distintos miembros de la jerarquía dirigieron al arzobispo de Tarragona dando su parecer sobre los puntos a incluir entre los que debían ser tratados en la conferencia de metropolitanos, también se prestó poca atención al tema del matrimonio, hecho que destaca, principalmente, en aquellas que fueron enviadas con anterioridad a la existencia del documento colectivo, toda vez que tales comunicaciones, enviadas al cardenal VIDAL por los respectivos metropolitanos una vez recogido el parecer de sus sufragáneos o, en algunos casos, por estos directamente, lo fueron durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1932, es decir, muchas de ellas cuando se estaba elaborando el documento de 25 de julio. Sobre tales comunicaciones podemos observar lo siguiente:

Provincia valentina: el arzobispo, Dr. MELO, escribe a VIDAL el 14 de julio de 1932, antes, por tanto, de la publicación del documento colectivo, enviándole el parecer de sus sufragáneos. No hablaban del tema del matrimonio ni del divorcio los obispos de Menorca, Segorbe, Mallorca, etc.

(78) También el obispo mallorquín, Dr. José MIRALLES SIBERT, había escrito al cardenal VIDAL el 26 de julio preguntándole si tenía instrucciones de la Santa Sede sobre la ley del matrimonio civil o si se había resuelto algo por los metropolitanos, se lo comunicara, dadas las dificultades que iban a presentarse a la curia con motivo de su entrada en vigor. *Església i Estat durant la segona...*, III, págs. 154-155, nota 1.

Ibiza, y Oribuela. Tan solo el propio arzobispo de Valencia incluye estos puntos:

"82. Conveniencia de que se de una Instrucción de carácter general determinando la licitud de la intervención de los jueces, abogados y procuradores católicos en las causas de divorcio que hayan de sustanciarse ante los tribunales civiles."

"92. Supuesto el carácter obligatorio que las leyes patrias dan al llamado matrimonio civil, sería oportuno que se dictara una disposición estatuyendo que los católicos deben celebrar previamente el Matrimonio Canónico."

Provincia cesaragustana: Comunicación del arzobispo, Dr. DOMENECH, de 26 de julio de 1932. No habían contestado los obispos de Jaca y Teruel. No se manifestarían sobre la conveniencia de tratar del matrimonio ninguno de los cuatro obispos restantes; tan solo el de Tarazona, Dr. GUMA, haría alusión a las leyes civiles hasta entonces promulgadas, pero sin referirse a las matrimoniales expresamente, destacando en su comunicación la queja de la falta de uniformidad del episcopado y la necesidad de la debida protesta de los obispos, unidos a la reacción mantenida por el pueblo católico español."

(79) Sobre este extremo iban a tratar los puntos séptimo y octavo del apartado segundo del documento colectivo (Ver el apéndice num. 10).

(80) Op. cit., III, págs. 335-338. Como hemos visto este punto fue recogido en las normas dadas a los fieles en desarrollo del documento colectivo,

(81) "Fuera de los asuntos que derivan de la actuación del Gobierno y que a todos naturalmente se sugerirán, no se me ocurre cosa especial que indicar en orden a las futuras conferencias de Metropolitanos,

"Yo solamente he echado de menos la falta de unión y de uniformidad de acción entre nosotros. Creo sinceramente que ello nos ha hecho perder varias partidas. Por lo demás, mi parecer es que hemos llegado al máximo límite de la

Provincia vallisoletana: Carta del arzobispo, Dr. GANDASEGUI, al cardenal VIDAL del 30 de julio. El obispo de Zamora hablaba de la conveniencia de tratar del tema:

"Por anticipado acepto todos los puntos que las circunstancias actuales han de sugerir al criterio elevado de los Excmos. Metropolitanos, esperando con fundamento que entre aquellos serán objeto de estudio, los medios prácticos para atenuar, en cuanto sea posible, los daños que se derivarán de las leyes sobre Matrimonio civil y enseñanza laica..."

El de Segovia, quizá por las repercusiones sobre su última actuación, se inhibió, no formulando parecer alguno y poniendo en manos de su arzobispo la opinión a dar. No se refirieron al tema los obispos de Salamanca ni Ciudad Rodrigo, si bien este último incluiría en su comunicación un punto relativo a "Orientaciones en vista de la legislación civil", señalando la "conveniencia de nombrar una comisión permanente en Madrid que estudie con rapidez las leyes que se relacionen con la Iglesia y proponga, de acuerdo con los Metropolitanos, la conducta que haya de observarse uniformemente..." Por su parte los obispos de Astorga y Ávila, que escribirían directamente al cardenal VIDAL, no aludirían al tema, aunque era lógico al ser sus cartas, a diferencia de las anteriores, posteriores a la publicación de la declaración colectiva, llevando fechas de 10 y 13 de septiembre, respectivamente."

condescendencia. El pueblo no puede quedar solo en su movimiento de reacción. He oído y leído demasiadas quejas de que no nos movemos. ¿Oportunidad y manera? Es lo que yo no sabría decir: el prudente consejo de las 'Sesiones', tal vez hallaría la forma."

Església i Estat durant la segona..., III, págs. 338-341.

Tampoco los sufragáneos de la provincia burguense ni su arzobispo, que escribió a VIDAL el 10 de agosto en nombre de todos, incluyeron el tema entre los que deberían ser tratados, probablemente por la misma razón que acabamos de apuntar, si bien el Dr. CASTRO ALONSO había comunicado al cardenal VIDAL en 10 de julio que tenía ya en su poder los puntos propuestos por sus sufragáneos.

Con posterioridad a la aparición del documento colectivo cursaría también la provincia toletana su propuesta por medio del obispo de Sigüenza, Dr. NIETO MARTÍN, que actuaría de metropolitano, según carta escrita al arzobispo de Tarragona el 12 de agosto, fecha en la que le comunicaba haber recibido también las galeradas de la carta colectiva, que había enviado inmediatamente a todos los obispos de esa provincia eclesiástica. También el arzobispo de Santiago de Compostela remitiría al cardenal VIDAL su comunicación a mediados de agosto y en ella no se aludiría a los temas de matrimonio civil o de divorcio.⁽⁸³⁾

Por su parte los sufragáneos de la provincia granatense, en la comunicación que, en nombre de todos envió el Dr. BASULTO, obispo de Jaén, actuando como metropolitano de la sede vacante, señalaban expresamente, tras recoger los puntos que esa provincia consideraba debían ser tratados por los metropolitanos, que "otros asuntos, principalmente los referentes al matrimonio, ya están resueltos..."⁽⁸⁴⁾

(83) Op. cit., III, págs. 344-347.

(84) Op. cit., III, págs. 348-349. La comunicación del Dr. BASULTO, sin fecha, parece ser de finales del mes de agosto.

Y, por último, la provincia hispalense tampoco incluiría los temas de matrimonio o divorcio entre los puntos a tratar por la conferencia, según la comunicación enviada al cardenal VIDAL por el Dr. ILUNDAIN el 22 de agosto de 1932, trasladando las propuestas de cada obispo y las suyas propias.

Como ya hemos apuntado, una vez recogidas las opiniones de los distintos miembros de la jerarquía, el cardenal VIDAL resumió los más esenciales en nueve puntos que envió el 1 de octubre al cardenal FACELLI y al nuncio, para que fueran aprobados por la Santa Sede a fin de que se pasara a celebrar las conferencias provinciales, previas a la de metropolitanos.⁽¹⁾ Recibida la aprobación lo comunico inmediatamente a los arzobispos y a finales de octubre tuvieron lugar las reuniones de estos con sus respectivos sufragáneos. En ellas se daría al tema del matrimonio el tratamiento siguiente:

Provincia burguesa. Fue esta provincia eclesiástica, a la que pertenecía, precisamente, el obispo de Segovia, la que más se detuvo en el tratamiento del tema, recomendando se siguiera insistiendo en él y se prescribieran normas para los futuros contrayentes que impidieran su posterior separación civil:

"... Por lo que hace a la ley de matrimonio civil, que tan gravemente viola los derechos natural, divino-positivo y canónico, que se mantenga viva la protesta, se inculque el fiel cumplimiento de las normas dadas por los Excmos. y Rmos. Metropolitanos y las más particulares de los obispos en sus Boletines, procurando aprovechar el sentimiento de pudor y el concepto que del mal llamado matrimonio civil tiene todavía el pueblo

cristiano, robusteciéndolos) cada día mas. Puesto que ello afecta a la validez del Sacramento del matrimonio, ya que vicia radicalmente el consentimiento necesario, sería muy conveniente y aun necesario que se diesen normas generales y concretas para prevenir el caso de que los contrayentes se acercasen al Sacramento con la condición, expresa o tácita, de separarse, si no se entendieran luego entre sí."

Provincia granatense: No hubo conferencia por hallarse en Roma el obispo de Jaén. Escribirían al cardenal VIDAL el obispo de Almería y el vicario capitular de Granada, que no trataron el tema.

Provincia hispalense: Su propuesta, de acuerdo con la conferencia celebrada los días 21 y 22 de octubre, era mas comedida que la realizada por la provincia de Burgos, por cuanto tan solo recomendaba continuar en la línea establecida por el documento colectivo, siendo relevante la información que daba sobre el número de matrimonios civiles que se celebraban en la diócesis de Sevilla, en parte debidos a unas coacciones que no especificaba.""

"... Por lo que atañe al matrimonio se acuerda la suma conveniencia de seguir, en lo que afecta al divorcio, las últimas disposiciones dadas por la Autoridad eclesiástica; y, en lo relativo al matrimonio propiamente dicho, debe aconsejarse que lo contraigan primero ante la Iglesia, y después acudan al Juzgado. Comienza a cundir desgraciadamente entre los fieles el matrimonio civil, dándose en la Diócesis de Sevilla bastantes casos; a ello contribuye no poco la coacción que se ejerce de muy diversas formas para impedir el matrimonio canónico."

(86) Sobre la situación del cristianismo en Andalucía ver lo indicado en la nota 131 del capítulo "La cuestión de la enseñanza". En la obra citada de ORDÓÑEZ MARQUEZ, al continuar hablando de la memoria elaborada por el cardenal ILUNDAIN con motivo de su visita "ad limina", también recoge el autor la alusión del cardenal al tema del matrimonio civil, tratado a continuación del de los entierros: "Pesaba sobre los párrocos la prohibición de asistir a entierros católicos; medida que dio como resultado un cincuenta por ciento de entierros

Provincia tarraconense: No trató el tema.

Provincia toletana: Tampoco trató el tema, refiriéndose, en conjunto, a los diversos extremos contenidos en el punto octavo propuesto para debatirse en la conferencia en unos términos que recogían la protesta ya realizada por el obispo de la provincia cesaragustana, Lr. GOMA, en privado al cardenal VIDAL sobre la necesidad de que los prelados se manifestaran y orientaran al pueblo:

"Siendo imposible en tan breve tiempo hacer un estudio detenido y minucioso de todos los problemas religioso-legales que bajo este número se apuntan, de todos los aspectos de los mismos los Prelados se limitan a hacer constar: 1º, su desconfianza de que se pueda, hoy por hoy, templar siquiera el rigor persecutorio de la legislación novísima; y 2º, la necesidad de dar satisfacción a los sentimientos de los católicos mediante protestas energicas y razonadas, ya que es cosa notoria que el enemigo malo que mueve a unos a perseguir a la Iglesia y a conculcar sus derechos, inspira, y con éxito, a los fieles lamentaciones amargas contra el silencio de sus Pastores."

Provincia valentina: Se limitó a insistir en la necesidad de que los fieles estuvieran debidamente adoctrinados sobre la indisolubilidad del matrimonio canónico y la conveniencia de que efectuaran también el civil:

"Parece prudente aconsejar a los fieles la celebración de la ceremonia civil del Matrimonio; pero insistiendo oportune et importune, en que no hay poder humano que pueda disolver el matrimonio canónico, único válido entre cristianos."

civiles o laicos. Algunos de estos fácilmente se convertían en manifestaciones sectarias y sacrílegas. En la misma línea colocaba el Prelado el problema de los matrimonios civiles y las coacciones ejercidas contra los canónicos, cuando la propaganda subversiva contra la santidad y dignidad del matrimonio cristiano, habiéndose llegado a encarcelar y a multar a párrocos por haber tocado estos temas en la predicción sagrada." ORDOÑEZ MARQUEZ, Juan, Op. cit., pag. 221.

Provincia vallisoletana: No se celebró conferencia, mas los distintos obispos escribirían directamente al cardenal VIDAL. Tan solo el de Ciudad Rodrigo se referiría al tema en un comentario generico sobre las distintas leyes secularizadoras, basandose en las normas ya impartidas por el episcopado y en la necesidad de continuar con la protesta ante el poder civil:

"Sobre las leyes de cementerios, entierros y viáticos y matrimonio todo el Episcopado ha dado ya normas, las cuales deben ser explicadas constantemente a los fieles, para que estos no se acostumbren al naturalismo, y forman parte importantísima de las reclamaciones legales de la Iglesia contra las inferencias del Estado."

Provincia cesaragustana: No hubo conferencia, los obispos que escribieron al cardenal VIDAL no aludieron al tema.

Provincia compostelana: No se celebró conferencia, en las comunicaciones enviadas por los obispos de Luy y de Orense, estos no aludieron a las cuestiones de matrimonio civil o divorcio. ""

5. La restante actuación de la jerarquía en la cuestión relativa a la familia durante el primer bienio de la segunda República.

Como hemos indicado al principio de este capítulo el tema relativo a la familia, y principalmente los derivados de las cuestiones de divorcio y matrimonio civil no sería de los que mas atención, entre las normas secularizadoras del Estado, recibirían del episcopado español.

Así, una vez suscrito el documento colectivo de julio de 1932 y las normas subsiguientes a él, poca tinta haría derramar a los prelados la nueva legislación matrimonial. De hecho, entre los boletines consultados, tan solo hemos encontrado un caso que -quizá porque fuera el único obispo que se adelantara a dictar sus normas en latín- quisiera reiterar en el nuevo año palabras relativas al divorcio o al matrimonio civil. Fue el obispo de Zamora, Dr. ARCE OCHOTORENA con ocasión de una pastoral dirigida a los fieles en la que trataba conjuntamente cuestiones relativas a la familia y a la enseñanza, "" insistiendo especialmente en la degradación que venía sufriendo aquella y en la necesidad de restaurarla urgentemente, dadas las "brechas muy profundas y muy extensas" que padecía, "con dado manifiesto de la salvación de las almas". Entre tales brechas ninguna había tan funesta como la que había "arrancado del matrimonio su condición privilegiada de sacramento cristiano", ya que, según la ley, este había sido rebajado "al nivel de un simple y elemental contrato que se perfecciona y subsiste y se anula al capricho y libre voluntad de los esposos."

(22) Ver la nota 214 del capítulo "La cuestión de la enseñanza".

Contrariamente a esta regulacion, el matrimonio cristiano, instituido por Dios, hacia al hombre y a la mujer una sola carne para siempre, fuera de cuya esencia -en un pensamiento de la epoca, lógicamente tradicional- se convertia en

"... opresion para la mujer, abandono de los hijos, debilitacion del sentido moral de los esposos, sustitucion del amor elevado y abnegado por el mas desentrenado egoismo, y como termino de todo, la ruina espiritual de las almas, la destruccion de la familia y la decadencia de la sociedad cuya vida y prosperidad estan condicionadas por la de la familia que es su causa material y nervio vital de su existencia."

Mas, con independencia de estas consideraciones, que indudablemente influian en el orden temporal de las cosas, los catolicos necesitaban tener muy presente que, segun normas reiteradas de la Iglesia, el matrimonio era indudablemente un sacramento y, como tal, si no venia consagrado por ella, se convertia en "concubinato".

"En consecuencia, una ley civil que suponiendo divisible para los catolicos el Sacramento y el contrato matrimonial pretenda regularizar su validez, contradice la doctrina de la Iglesia, invade los derechos inalterables de la misma y equipara el concubinato con el Sacramento del matrimonio, sancionando el uno por tan legitimo como el otro."

Frete a tal situacion, los fieles debian recordar como Cristo habia transformado el vinculo tradicional entre los esposos en gracia nueva, de ahí que -en una idilica vision muy alejada de la consideracion de lo que era una familia de los años treinta- concluyera el prelado afirmando que el amor entre los esposos "cuando esta anudado por el vinculo indisoluble y perfecto" era cuando tenia eficacia para mantener la cohesion familiar y la felicidad del hogar, felicidad que, para el, venia definida por estas burguesas y patriarcales coordenadas:

"El amor mutuo, recíproco y exclusivo, brotando del corazón de los esposos y derramándose sobre sus hijos, criados y domésticos, circula por las arterias del organismo de la familia como la savia por el árbol y la sangre por las venas produciendo los frutos de sumisión en la esposa, obediencia en los hijos y fidelidad en los criados que describe el Apóstol S. Pablo en el cap. 32 de su carta a los Colosenses."

Esta era, para el obispo, "el retrato de la familia cristiana", que los padres, los hijos y los criados debían reproducir -según afirmaba, sin ni siquiera hacer una interpretación del abismo de veinte siglos que las frases de San Pablo podían tener- "para salvar del naufragio a la sociedad moderna, de tantos males amenazada por el diluvio de errores que por todas partes la rodean." ("v")

Con independencia de esta pastoral casi monográfica, y de la que, hablando sobre el mes del rosario había suscrito el obispo de Barcelona, Dr. IRURITA en septiembre de 1932, en la que, entre otras cuestiones, se refería a "esas leyes del matrimonio civil y del divorcio y del laicismo docente..." de las que parecía desprenderse que "los mismos Poderes Públicos se han coaligado por todas partes contra la familia, pues, al legislar, ya prescinden de ella, ya la miran con recelo, ora la despojan de sus derechos, ora la hieren so color de defenderlos..." ("v") con independencia de estas palabras, decimos, no hemos encontrado entre los boletines consultados nuevas voces del episcopado que se alzarán en el primer bienio sobre el tema tratado.

Solo nos queda así por reseñar la información recabada por algunas curias diocesanas respecto al impacto de la nue-

(89) 14 de enero de 1933, "Exhortación Pastoral", BOE de Zamora, año 70, 16 de enero de 1933, núm. 2, págs. 17-27.

(90) 15 de septiembre de 1932, "Exhortación Pastoral del mes de octubre", año 75, 30 de septiembre de 1932, núm. 18, págs. 357-363.

va legislación entre los fieles, si bien, es preciso indicarlo, tan solo hemos encontrado noticia de dicha solicitud, entre los boletines consultados, en el correspondiente a la archidiócesis de Zaragoza, que a principios de 1933, recabo, por edicto del vicariato general del arzobispado, los siguientes datos:

"12. Nota de los religesos que desde primeros de agosto hasta 31 de ediciembre del corriente ano, hayan erectuado solamente el llamado matrimonio civil, con las circunstancias de cada caso.

"29. Nota de los que, durante el mismo tiempo, estando casados canónicamente, hayan solicitado del tribunal civil el divorcio quoad vinculum; y si alguno, despues de obtenido este, ha intentado contraer nuevo matrimonio con arreglo a las disposiciones civiles.

"39. Nota de los nacidos en el mencionado plazo, que no hayan sido bautizados. Y

"42. A contar desde primero de enero de 1933, Nos remitiran al final de cada semestre las notas correspondientes a los hechos expresados en los tres primeros numeros que hayan ocurrido durante los seis meses respectivos."

Como decimos no hemos encontrado peticion de datos semajantes en otros boletines consultados ni, desde luego en el de la archidiócesis de Zaragoza publicación de los resultados que pudieran haberse obtenido, lo que hubiera arrojado sobre ello una luz interesante, desde el punto de vista de la estadística eclesiástica, si se hubiera hecho en toda España. Aunque el tema exceda de esta tesis si podemos afirmar que a nivel de prensa se siguieron al principio con cierta fruición informativa los primeros casos de divorcio planteados,⁽⁹¹⁾ simple rerlejo de casos anecdó-

(91) 27 de diciembre de 1932, "Vicariato General del Arzobispado.- Edicto", BOE de Zaragoza, año 72, 2 de enero de 1933, núm. 1, págs. 13.

(92) "El primer divorcio", "El Sol", 29 de mayo de 1932; "Los matrimonios católicos", "El Debate", 2 de julio de 1932; "Sentencia sobre divorcio", "El Sol", 27 de noviembre de 1932; "Los divorcios en San Sebastián", "El Sol", 1 de

ticos, incluso a nivel de resultados provinciales. No obstante, dichos datos, desde la vigencia de la ley hasta 31 de diciembre de 1933 han sido analizados por diversos autores, a los que nos remitimos.'''

Un hito singular, en cuanto no dejaba de representar la mas dura protesta del episcopado ante la actuacion estatal en materia matrimonial, serian las palabras contenidas en la declaracion colectiva del episcopado espanol de 25 de mayo de 1933, con motivo de la ley de confesiones y congregaciones religiosas, en la que los prelados harian una introduccion resumiendo el periplo de las relaciones Iglesia-Estado desde la llegada de la Republica. En ella se referirian a la cuestion aqui analizada, reseñando todas las actuaciones habidas y la postura de los creyentes con respecto a la nueva legislacion, reseña en la que, insistiendose en la regulacion antes vigente delCodigo civil, se soslayaba - pues para la jerarquia no dejaria de ser esta una postura congruente, sin entrar a analizar sus repercusiones sociales- la necesidad de los contrayentes que quisieran unirse fuera de la iglesia de apostatar previamente de sus creencias:

enero de 1933: "En Madrid y su provincia se han presentado en un año doscientas sesenta demandas de divorcio", "El Sol", 29 de abril de 1933: ...

- (93) RAMIREZ JIMENEZ opina que "la sociedad española, tradicional y fuertemente unida a las costumbres católicas hasta aquellos años, recelaría ante esta improvisada válvula de escape que las Cortes le ofrecían", dando a continuación datos de divorcios hasta 1933 tomados del Anuario Estadístico de 1936 y constatando la imposibilidad de obtener datos relativos a los años subsiguientes. RAMIREZ JIMENEZ, Manuel, *Los grupos de presión en la segunda República española*, Madrid, 1969, págs. 253-261. Del "lento incremento de divorcios" entre 1932 y 1933, "muy pequeños en relación a la población total española y al número de matrimonios durante dos años", que constata el autor citado, nos da cuenta también el comentario aparecido en "El Sol" en defensa de la institución y en el que se daban datos de las demandas de divorcio habidas en Madrid desde que se votó la ley hasta el 1 de abril de 1933. En dicho comentario se indicaba, a la vista del escaso número resultante, que "el pueblo español ha acogido la nueva institución civil con moderación suma", destacando que un alto porcentaje de demandas, en contra de lo que la jerarquía venía

"Por la ley del divorcio y las disposiciones secularizadoras del matrimonio se ha negado a la Iglesia la potestad judicial en las causas matrimoniales de sus fieles, obligandoles abusivamente a comparecer en causa canonica ante el tribunal civil, cuando su contesion religiosa se lo veda en conciencia; se ha pretendido regir el mismo vinculo conyugal de los bautizados, lo que implica una invasion sacrilega en la soberania espiritual de la Iglesia, por ser para ellos el contrato nupcial inseparable del sacramento; y ha sido desconocido el matrimonio canonico en sus efectos civiles, abrogando las disposiciones del codigo civil espanol en esta materia, que, al garantizar la libertad de todos, constitua un verdadero progreso, por cuanto evitaba la duplicidad del acto y reconocia juridicamente la unidad de forma, soslayando de esta suerte, sin perjuicio alguno para los efectos legales y la intervencion legitima de la autoridad del Estado, el llamado matrimonio civil, que para los catolicos no pasara jamas de mera formalidad, de torzosa simulacion, externa al mutuo consenso y al rito sacramentario, intrinsecamente inseparables y generadores de su union conyugal indisoluble." (14)

El ultimo paso a dar por la Iglesia ante la legislacion secularizadora del Estado espanol en materia de matrimonio, que venia a dar por terminadas las disposiciones concordadas, fue, logicamente, la supresion del tribunal de la Rota. Este habia seguido gozando de la correspondiente partida en los presupuestos del Estado hasta 1933, en que fue definitivamente suspendida. (15)

El 1 de agosto de 1933 el nuncio, presidente de dicho tribunal, enviaba a todos los obispos una carta comunicando-

reiterando, habia sido presentada por mujeres, ("El divorcio en la práctica", "El Sol", 30 de abril de 1933). A esta misma conclusion llega Ricardo LEZCANO en su obra *El divorcio en la II Republica*, Madrid, 1979, en la que incluye una serie de cuadros estadísticos sobre los datos que cabe obtener en el periodo indicado, aunque sin citar la fuente de donde los obtiene, *Op. cit.*, págs. 263-280.

(14) *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, págs. 1080-1099. También en IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, cit., págs. 189-219.

(15) *Op. cit.*, II, pág. 90, nota 77.

les tal suspensión, con la que se cerraría la actuación de la Iglesia sobre la cuestión de la familia en el período examinado.

"La difícil situación creada en España a la Iglesia Católica, la ruptura del régimen concordatario, y la laicización total del matrimonio, han traído como consecuencia el desconocimiento que el Estado ha hecho del Supremo Tribunal de la Rota Española privilegio secular, extraordinario y único, concedido por la benignidad de la Santa Sede.

"Por la fuerza de estas circunstancias, que además han hecho escasas y casi nulas la materia y la obra del Supremo Tribunal, la Santa Sede, bien a su pesar y no obstante el sincero y bien probado amor que profesa a la católica España, se ha visto obligada a disponer que el régimen de apelación en las causas eclesiásticas se reintegre en España a los cauces del Derecho común, cesando por consecuencia en sus funciones el mencionado Tribunal de la Rota Española, el cual, a partir de esta fecha, no admite nuevas apelaciones y debe sustanciar y terminar las pendientes en el plazo de un año y en la forma que por esta Nunciatura oportunamente se determine.

"Al tener el sentimiento de comunicar a V.E. la resolución de la Santa Sede, creo un deber tributar en su nombre un homenaje de elogio a la gloriosa historia del Supremo Tribunal de la Rota Española y de gratitud a la laboriosa y competente actuación de sus miembros, los cuales, por benigna voluntad de la Santa Sede, seguirán de por vida disfrutando de la consideración, honores, preeminencias y privilegios que hasta el presente les han correspondido."

Cabe indicar, como síntesis final de este capítulo, que el intento de la República de posibilitar que muchos matrimonios rotos rehicieran sus vidas introduciendo el divorcio -medida que llegó a contar incluso con la defensa de un sacerdote en las Cortes- y el más radical de negar

(96) 1 de agosto de 1933. Esta carta fue publicada en todos los boletines eclesiásticos. También figura en *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, pag. 939.

toda virtualidad jurídica al matrimonio canónico, único reconocido por la Iglesia, no fue materia que recibiera la misma contestación individual por parte de la jerarquía que la que había recibido, por ejemplo, algo tan esencial al devenir social como la de la enseñanza. Reacción esta sin duda motivada por la publicación de un documento colectivo monográfico sobre la cuestión del matrimonio.

Ello no quiere decir, sin embargo, que el episcopado se abstuviera, ni mucho menos, de alzar su voz contra este nuevo intento de secularizar todos los ámbitos de una sociedad hasta entonces presidida por los rituales y creencias católicos; en ocasiones suavemente, en otras con extrema dureza como sería el caso singular del obispo de Segovia, al que el gobierno, por sus palabras contra el matrimonio civil, llegó a suspender sus temporalidades- no dejó de condenar la institución del matrimonio civil -calificándolo no solo de "amancebamiento vulgar", sino incluso de "barraganía y concubinato"- y el divorcio, toda vez que la Iglesia sólo podía consentir la mera separación de los cónyuges en casos extremos; todo ello sin dejar de augurar una serie de males para la mujer y los hijos -con olvido que en el proyecto de ley se había llegado a contemplar que por la esposa se pudiera interponer la demanda sin alegación de causa, aunque esta propuesta no llegara a prosperar-, y pasando a dictar una serie de normas tendentes sobre todo a insistir en la celebración del matrimonio canónico previamente al civil y en el recordatorio del pecado que cometían quienes convivieran maritalmente amparados tan solo por la celebración de este último. En todas estas exhortaciones se dió, una vez más, una profunda disparidad, lógicamente anclada en la misma doctrina, entre las posturas asumidas por la jerarquía ante esta legislación secularizadora que, con una rapidez y constancia singulares, pretendía transformar, a golpe de norma, la sociedad española.

CAPÍTULO V

=====

LA SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA CUESTIÓN DE LOS
ENTERRAMIENTOS.

1. La legislación de la República.

Tres meses antes de ser proclamada la República publicaban los boletines oficiales eclesiásticos de las diócesis de Orense y Mondoñedo, reproduciéndola del de la diócesis de Jaén, una resolución de 30 de julio de 1930 del Gobernador civil de esta última provincia relativa al enterramiento de un niño efectuado en La Bobadilla, anejo de un municipio de la misma. Por ella se ordenaba al alcalde pedáneo el cumplimiento de la legislación vigente," que reconocía el derecho de la Iglesia "a dar sepultura sagrada a los que mueren dentro de su seno sin que ni la voluntad de la familia ni el permiso de la autoridad administrativa puedan hacer que se les entierre legalmente en cementerio civil." (12)

Fue el decreto de los ministerios de Justicia y Gobernación de 9 de julio de 1931 -una de la cuatro disposiciones de carácter general que sobre esta materia

-
- (1) La resolución citaba las Reales órdenes de 25 de octubre de 1887, 31 de agosto y 29 de octubre de 1888, 8 de noviembre de 1890, 18 de marzo de 1887 y 29 de octubre de 1921 "entre otras".
- (2) 30 de julio de 1930. "Disposiciones del Poder Civil.- Sobre derecho de la Iglesia en orden a sepultura sagrada". BOE de Mondoñedo, año 74, 7 de enero de 1931, núm. 1, pág. 6 y BOE de Orense, año 98, 19 de enero de 1931, núm. 1, págs. 7 y 8.

dictaría la República- el que primero vendría a incidir sobre tal derecho al declarar en su artículo segundo que "La sepultura que haya de darse a los que no alcanzaron la edad para testar corresponde determinarla a los padres, familia o, en su caso, a los tutores", estableciendo, además, en el tercero que sería "la voluntad expresa del difunto o, en su defecto, la interpretación que de ella hicieran sus familiares o causahabientes..." la que decidiera el carácter del enterramiento. Con este decreto, dictado en desarrollo del principio de libertad de creencias y cultos contenido en la declaración que el gobierno provisional había hecho al país al iniciar su andadura política, venía a infringirse un duro golpe a la tradicional potestad de la Iglesia para decidir sobre el enterramiento de sus fieles, y a ella aludía, precisa y expresamente su preámbulo."

- (3) "Los preceptos del nuevo derecho público español en lo que concierne a la libertad de cultos, tienen derivaciones que alcanzan al supremo momento de la muerte, la pugna civil de nuestro pueblo durante el período constitucional se ha exteriorizado, aun en los actos de sepelio, entablándose a veces verdaderas luchas en torno a los muertos. Ello obedece a las determinaciones oscuras y victoriosas de la Real orden de 18 de marzo de 1861 y 8 de noviembre de 1890; a virtud de ambas, las Autoridades eclesiásticas, en algunas ciudades y pueblos de España, han creído que a ellas correspondía exclusivamente el derecho a guardar las llaves de los cementerios civiles y, en su consecuencia, a autorizar los enterramientos de este carácter. Tal medida era origen de que el derecho de los disidentes apareciera públicamente transformado en una sanción, consistente en la privación de enterramiento en sagrado. A su vez, la segunda de las Reales órdenes citadas autorizaba a la Iglesia a decidir ante la muerte del párvulo sobre la sepultura de éste, no a título de derecho, sino de obligación. Esta doctrina es inadmisibile, porque quienes interpretaron la presunta voluntad religiosa del niño con el acto del bautismo son a su vez quienes pueden decidir con autoridad en su enterramiento. Mas los conflictos perduran, y en el espacio de breves días se han presentado con carácter apremiante varios casos a la resolución del Gobierno.

«Para coordinar transitoriamente la nueva situación de derecho público creada por la República con cuanto atañe a la política de Cementerios, el Presidente del Gobierno provisional, a propuesta de los Ministros firmantes, decreta:

«Artículo 19. Los cementerios civiles dependerán exclusivamente de la Autoridad municipal, única competente para conocer de todo lo que respecta a su guarda y conservación, así como en lo que concierne a enterramientos civiles.

«Artículo 20. La sepultura que haya de darse a los que no alcanzaron la edad para testar corresponde determinarla a los padres, familia, o, en su caso, a los tutores,

Como hemos visto, ya el cardenal SEGURA en la exposicion de agravios que, en nombre de los metropolitanos, habia elevado al presidente del gobierno provisional el 3 de junio, habia incluido en la enumeracion de las violaciones que el nuevo regimen estaba haciendo a los derechos de la Iglesia, la del "Anuncio oficial para fecha proxima de la secularizacion de los cementerios..." " Pero el proposito del gobierno con el decreto citado no era otro, por el momento, que asegurar la plena independencia de las esferas civil y religiosa y, para ello, aparte de suprimir la potestad decisoria de la Iglesia sobre el caracter del enterramiento, proclamaria en el articulo primero de la nueva norma la exclusiva dependencia de los cementerios civiles de la autoridad municipal.

El camino legal para la secularizacion de los cementerios no tendria realmente la puerta abierta hasta que tal proposito fuera recogido en el articulo 27 de la Constitución." Promulgada esta, la Cámara, quizá porque el tema se habia convertido en una cuestion espinosa, como en

Artículo 32. La voluntad expresa del difunto o, en su defecto, la interpretación que de ella hicieren sus familiares o causahabientes será la que decida inapelablemente del caracter del enterramiento, con arreglo al Decreto de 21 de mayo del corriente año, sin que precise la abjuración pública y solemne.

Artículo adicional. Las Autoridades civiles prestarán todo género de apoyo a quienes les requieran para que se dé cumplimiento a este Decreto."

Gaceta de Madrid de 10 de julio de 1931, núm. 1912, pág. 275. Este decreto, publicado, como el resto de la legislación republicana, en los diversos boletines oficiales eclesiásticos, fue ratificado por el Parlamento con fuerza de ley el 30 de diciembre de 1931.

- (4) Ver el epigrafe cuarto del capitulo "La Iglesia ante la Republica".
- (5) Artículo 27, párrafo segundo: "Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por activos religiosos."

el preámbulo del decreto de 9 de julio se indicaba, "abordo pronto el debate del proyecto legislativo presentado por el ministro de Justicia Fernando DE LOS RÍOS, y ya el 30 de enero de 1932 era aprobada la ley que desarrollaba el precepto constitucional. Esta ley, que constaba de cuatro artículos, contemplaba en los tres primeros los lugares de enterramiento, estableciendo que los cementerios municipales serían comunes a todos los ciudadanos sin diferencia alguna por motivos religiosos, si bien en ellos podrían practicarse los ritos de los distintos cultos, aunque solo ante cada sepultura. Para eliminar las diferencias por motivos confesionales en los cementerios de propiedad municipal, establecía que las autoridades locales harían desaparecer las tapias de separación existentes entre los recintos civiles y confesionales cuando aquellos fueran contiguos y a dichas autoridades correspondería igualmente la guarda, administración, conservación y régimen de enterramientos en estos cementerios.

A fin de asegurar la efectividad de tales disposiciones establecía la obligatoriedad por parte de cada municipio de poseer cementerio de su propiedad; para ello vendrían obligados a construirlos en el plazo de un año, prorrogable por causa justificada. Pero los municipios también podrían -y ello fue causa de las mayores controversias entre las autoridades civiles y eclesiásticas- proceder a la incautación de los cementerios parroquiales o de aquellos otros que, de hecho, prestasen el servicio de cementerio general dentro del término municipal respectivo, expropiando, en los casos en que así procediera, el derecho

(6) A pesar del contenido de dicho preámbulo queremos recordar aquí la alusión de CUENCA TORIBIO a "los excepcionales y escandalosos enterramientos laicos" que tuvieron lugar a lo largo de la Segunda República, CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Los católicos españoles ante la Segunda República*, en AAVV, *Iglesia, Estado y Sociedad en España, 1930-1982*, al cuidado de Joaquín RUIZ GIMÉNEZ, Barcelona, 1984, págs. 70-78.

que sobre ellos pudiera acreditarse y con sujeción a las bases que se establecerían por el poder ejecutivo.

La ley contemplaba igualmente los cementerios de carácter privado existentes, que serían respetados, pero prohibiendo su ampliación o la construcción de otros nuevos y pasando los municipios a intervenir directamente en su administración, para lo cual, en el plazo de un mes a partir de su promulgación, deberían efectuar una revisión de los derechos establecidos para las inhumaciones y determinar cuáles fueren y a qué personas pudieran corresponder. Dichas personas serían las únicas que podrían recibir sepultura en tales cementerios, pasándose, una vez atendidos sus derechos, a clausurar los recintos, clausura que también podía efectuarse, a criterio de los ayuntamientos, por causa de conveniencia pública.

No permitía la ley la inhumación en los templos o en sus criptas, ni en las casas religiosas o en los locales anejos a uno y a otras, "salvo lo dispuesto en el artículo primero".

Por último, refiriéndose al carácter de los enterramientos, establecía que estos no serían religiosos para los fallecidos mayores de veinte años "a no ser que hubiesen dispuesto lo contrario de manera expresa", dependiendo tal enterramiento en el caso de los menores de dicha edad, o de los incapaces para testar, de la interpretación que de su voluntad hiciera la familia, a no ser que hubiesen dispuesto lo contrario expresamente.⁽⁷⁾

(7) "El Presidente de la República Española.
 «A todos los que la presentan vieren y entendieren, sabed:
 Que las Cortes han decretado y sancionado la siguiente Ley:

«Artículo 12. Los cementerios municipales serán comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales. En las portadas se pondrá la inscripción "Cementerio municipal". Sólo podrán practicarse los ritos

El proyecto presentado a las Cortes por el ministro de Justicia el 4 de diciembre de 1931, era mas tolerante que el texto definitivo de la ley, toda vez que: a) autorizaba mas ampliamente la práctica de los ritos funerarios en el interior del cementerio, sin especificar que estos deberían efectuarse únicamente ante cada sepultura; b) No incluía la posibilidad de incautación de los cementerios parroquiales por los municipios; c) No aludía a la intervención de los ayuntamientos en la administración de los cementerios privados ni limitaba el número de enterramientos en ellos, y

funerarios de los distintos cultos en cada sepultura. Las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los confesionales, cuando sean contiguos. La guarda, administración, conservación y régimen de enterramientos en dichos cementerios corresponde a la Autoridad municipal. Los Municipios que por cualquier causa no tuvieran cementerio de su propiedad, vendrán obligados a construirlos en el plazo de un año. Este plazo podrá ser prorrogado por el Gobierno, en virtud de causa justificada.

Asimismo los Municipios podrán incautarse de los cementerios parroquiales, o de aquellos otros que de hecho presten el servicio de cementerio general dentro del término municipal respectivo, expropiando, en los casos en que así proceda, el derecho que sobre ellos pueda acreditarse, con sujeción a las bases que se establezcan por el Poder ejecutivo.

«Artículo 22. Los cementerios de carácter privado, hoy existentes, serán respetados; pero no se autorizará la apertura de ningún otro ni la ampliación de los actuales.

Promulgada esta Ley, los Municipios intervendrán directamente la administración de tales cementerios, a cuyo efecto dispondrán, en el plazo de un mes, una revisión de derechos establecidos hasta ese momento para las inhumaciones, determinando cuales sean y a qué personas corresponden.

Por ningún pretexto se autorizará la inhumación de quienes no figuren en las listas formadas para tal fin y una vez atendidos esos derechos, se procederá a la clausura de los cementerios.

No obstante, se reserva a los Ayuntamientos la facultad de proceder a la clausura de los cementerios por causa de conveniencia pública.

«Artículo 32. En ningún caso será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas, ni en las casas religiosas o en los locales anejos a unas y otras, salvo lo dispuesto en el artículo 12.

«Artículo 42. El enterramiento no tendrá carácter religioso alguno para los que fallezcan habiendo cumplido la edad de veinte años, a no ser que hubiesen dispuesto lo contrario de manera expresa.

Para los que al fallecer no hubieran cumplido la edad de veinte años, así como para aquellos en quienes concurra incapacidad para testar por causa de demencia, el carácter del enterramiento dependerá de la interpretación que de

d) El artículo sobre la declaración de voluntad de enterramiento religioso era menos rígido que el que figuraría en el texto definitivo.¹⁰⁾

Aun menos secularizador que este proyecto había sido el texto inicial leído por Fernando DE LOS RÍOS en el consejo de ministros del mismo día cuatro de diciembre, ya que permitía la creación de nuevos cementerios confesionales; sin embargo AZAÑA se opuso a tal posibilidad al entender que al cabo de unos años se volverían a plantear los mismos problemas que ahora se intentaban solventar y, así, era preferible, según él, el cementerio único, definitivamente. Por tal razón el proyecto fue modificado antes de ser presentado a las Cortes.

En los debates, que comenzaron el 13 de enero de 1932, fueron tenidos en cuenta para las modificaciones más

la voluntad del difunto vienen obligados a hacer sus familiares, a no ser que hubiese dispuesto lo contrario de manera expresa.

«Por tanto; Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta ley, así como a todos los tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

«Madrid a treinta de Enero de mil novecientos treinta y dos.»

Gaceta de Madrid, núm. 57, 6 de febrero de 1932, pág. 346.

La publicación del texto de la ley que, con independencia de la realizada por los distintos boletines eclesásticos, efectuaba el apéndice documental de estos de 1932, incluía las siguientes notas: al artículo primero: "No consta se hayan dado estas *bases*, que parece han de ser generales. Nótese que cuando el cementerio sea propiedad de la parroquia, hay que *expropiarlo* (es decir, abonar su importe)"; al artículo segundo: "Según texto, parece que los cementerios de monjas dentro de clausura deben respetarse (de no obstar causa de conveniencia pública) a favor de quienes formaban comunidad el 31 de enero"; al artículo tercero: "En vez de 19, parece debe decir 29, ya que es el art. 29 y no el 19 el en que [sic.] se limita o pone salvedad a este 39" y al artículo cuarto: "Para que conste esta *expresa* voluntad, respetables letrados aseguran basta la manifestación verbal de dos testigos. Para mayor seguridad, puede firmarse sencillo documento, firmando también dos testigos, o legalizando la firma un Notario." (Documental, año 1932, núm. 6, págs. 51-52)

(10) Ver el apéndice núm. 1, Comentarios sobre este proyecto en *Iglesia y Estado durante la segunda...*, págs. 518-521 y 580-587, notas 37 a 41,

importantes del proyecto: el voto particular presentado el día 12 por los diputados MORENO MALEO y SAPINA CAMARO: "Solo podran practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura"; la enmienda presentada el día 6 por los diputados DOMENEC PALEI, Juan LLUHI, Antonio y Juan XIRAY, Angel SAMBLACANT, Amos KUIZ y Angel RUBIO, que anadia al articulo primero todo el parrafo sobre la incautacion de los cementerios parroquiales, y el voto particular al articulo cuarto presentado por los diputados UOMARIZ y VARGAS, en el que se proponia que para los que fallecieran despues de los veinte años" sin especificar la forma de entierro, este careceria de caracter religioso, y en los casos de los de menor edad decidiria la familia. Al lado de estas fueron introducidas otras modificaciones segun distintas enmiendas y votos particulares, pero no fue incorporado ningun voto ni enmienda presentados y defendidos por los diputados catolicos."

Los problemas comenzaron a surgir en cuanto llego el momento de la aplicacion de la ley, ya que su texto dejaba lagunas y puntos oscuros que originaban una larga serie de dudas, lo que dio lugar a actuaciones divergentes, e incluso opuestas, tanto por parte de la autoridad civil como de la eclesiastica, haciendo patente la necesidad de unas normas del poder ejecutivo que contuvieran no solo los requisitos para la expropiacion de los cementerios parroquiales que la ley contemplaba, sino que tambien desarrollaran todo su articulado.

En prevision de tales normas y con el fin de especificar los problemas que de la aplicacion de la ley

- (9) En el proyecto de ley la edad fijada era la de testar, es decir, catorce años.
- (10) Sobre la actuacion de los diputados catolicos ver DS, V, núm. 99, pag. 3153 a DS, núm. 101, pag. 3279, tambien en *Església i Estat durant la segona...*, II, pags. 580-583, notas 37 a 42 y en "El Sol", días 14 a 21 de enero de 1932.

podrían derivarse -y que, de hecho, ya se estaban planteando-, escribió el cardenal VIDAL a AZAMA una carta en la que, entre otros temas, aludía a las posibles reñas que por parte del gobierno pudieran dictarse, indicándole su urgencia y exponiéndole su criterio sobre ellas, basado en que al aplicarse la ley por los alcaldes, y a fin de prevenir conflictos, tales normas deberían respetar las tradiciones y sentimientos populares. Así: que el clero entrara en los cementerios municipales para la práctica de los ritos en los enterramientos católicos; que en los cementerios privados, como los de las religiosas de clausura, se respetaran sus anteriores derechos, evitando que las autoridades municipales violaran dicha clausura; que fuera también respetado el derecho de algunas familias a recibir sepelio en las criptas de algún templo. Igualmente manifestaba el cardenal la necesidad del común acuerdo entre las autoridades civiles y eclesiásticas en el caso de la incautación de los cementerios parroquiales y generales, no realizándose hasta que todas las dificultades estuvieran solventadas así como la de determinar "con criterio benigno" los medios para manifestar la voluntad de recibir sepultura eclesiástica, sobre lo que indicaba que "bastaría la firma de un documento privado, la recepción de los últimos Sacramentos, la práctica de la religión, la manifestación hecha ante algunas personas, mayormente teniendo derecho a ello todos los bautizados, que son hoy la mayoría en España."'''

Acompañaba a esta carta, ejemplo, una vez más, de la disposición que el cardenal VIDAL mantuvo ante el régimen republicano tendente siempre a lograr la concordia entre el Estado y la Iglesia, la pastoral que había suscrito el 21 de febrero de 1932 exponiendo la doctrina eclesiástica sobre los cementerios católicos y que más adelante comentamos,

(11) *Iglesia y Eslat durant la segona...*, II, págs. 613-616.

según decía "para que V.E. la conozca, y vea si puede servirle de algo para las indicadas normas." y días más tarde, aprovechando el envío de otra carta a AZANA para tratar de temas ajenos a esta materia, incluía un punto que no había reflejado en la anterior, relativo a la necesidad de respetar las capillas y oratorios existentes en los cementerios "a tenor de lo que se dispone en el decreto de nacionalización de los bienes de la Compañía de Jesús", refiriéndose con ello a que dichas capillas y oratorios deberían cederse en uso a los ordinarios de las respectivas diócesis.⁽¹²⁾

(12) El artículo 92 del decreto de 23 de enero de 1932 establecía que "Las iglesias de la Compañía, sus oratorios y objetos afectos al culto, con exclusión de todo otro edificio o parte del mismo no destinado estrictamente a aquel, se cederán en uso, previo inventario, a los Ordinarios de las diócesis en que radiquen..." (Gaceta de Madrid, 24 de enero de 1932, núm. 24, págs. 816-817)

(13) Op. cit., págs. 636-637. El cardenal VIDAL tenía fundadas razones, y pocas esperanzas en consecuencia, sobre la actuación de las autoridades civiles en este punto. De las expropiaciones a lo largo del periodo examinado, y con independencia de los abusos cometidos en el tema estricto que analizamos, es ejemplo, en relación con la sugerencia del cardenal -si bien se trata del único que hemos encontrado con las características que se describen-, la disposición municipal, apoyada en la secularización del cementerio, sobre la capilla que prestaba servicio en el de Mahón, capilla que, según los razonamientos del obispo de Menorca, Dr. Juan TORRES RIBAS, era propiedad de la Iglesia y ni siquiera se hallaba en el recinto de la necrópolis. Aunque el boletín eclesástico de esta diócesis no figura entre los que han sido objeto de nuestro análisis, las cartas enviadas por el Dr. TORRES al alcalde de Mahón fueron reproducidas por el boletín eclesástico de Tarazona y Tudela:

"Nada inclinado el ánimo a luchas y discusiones, puesto que es bueno que el curso de los asuntos a tratar, corra por el cauce del sosiego espiritual; pero tanto como es el amor al tranquilo desarrollo y curso de los negocios encomendados, es no menor, y si mayor, el de que éstos no sufran ni experimenten quebranto o deterioro. En la presente hora nos hallamos en caso de poner toda nuestra decisión y toda nuestra voluntad para defender y sostener los legítimos derechos de la Iglesia. A tal efecto, llegada que nos fué noticia de que por la Autoridad Municipal habían sido cerradas las puertas de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Mahón, hubimos de dirigir al Excmo. Sr. Alcalde de aquella ciudad, la siguiente comunicación:

OBISPADO DE MENORCA,

"Hemos sido informado del cierre de la Iglesia de Ntra. Señora de Gracia, dispuesto por la Autoridad de V.E., acompañando a la orden algunas disposiciones que parecen revelar la creencia de que la Iglesia es de la

A estas cartas contestaría AZANA el 24 de marzo manifestando su acuerdo sobre casi todos los puntos

propiedad de la Municipalidad. Contra una y otra cosa, muy atentamente hemos de oponernos, fundada la oposición en las razones y legales motivos siguientes: fue construida la iglesia mucho más de un siglo antes de la construcción del Cementerio, por una Cofradía del nombre de la iglesia y para el culto público. Ambas edificaciones distan un buen espacio entre sí. Una orden disponiendo la retirada de todo signo de religión de los Cementerios, no puede alcanzar a esa iglesia. Porque exista la iglesia, no podría decirse que en el Cementerio existan signos de religión. El señalamiento de la iglesia para capilla del Cementerio fue y ha venido siendo una simulación en obsequio y favor de la Municipalidad. Los Ayuntamientos han estado siempre obligados por la Ley, hasta la llegada de la hora presente, a construir en los Cementerios decorosas capillas. La Madre Iglesia que aquí y en todo tiempo y lugar ha venido prestando su apoyo, según su espíritu, al Poder Civil, en todo lo justo y razonable, libró a la municipalidad, con su aquiescencia a aquel especial funcionamiento, de la carga de haber de construir una Capilla, y le facilitó un mayor espacio de terreno para enterramientos; y se vería ahora mal correspondida, viendo ahora desconocidos sus propios y legítimos derechos. Otra razón de lo que venimos exponiendo es el carácter que siempre ha ostentado la iglesia, de iglesia abierta al culto público con sus solemnes fiestas en el interior y procesiones, y jubilosas demostraciones populares en músicas, cabalgatas, fuegos artificiales..., todo con título, hasta oficial, de fiestas de Ntra. Señora de Gracia, fiestas que nada convienen y nada dicen con las capillas de Cementerios.

«Por lo que pueda referirse a la propiedad de la iglesia, basta advertir que tal propiedad sólo podría ser adquirida o por donación o venta, que nunca se han efectuado, o por Ley de desamortización. Esta ha quedado liquidada por los Concordatos de 1851 y 1859, por los que se dispone que todos los bienes no enajenados por aquellas Ley o que se hallen todavía en poder del Estado, sean devueltos y entregados a la Iglesia en perfecta propiedad, y lo mismo las iglesias abiertas al culto público.— Artículos de Concordato de 1851: 38, 39, 40 y 41; del Concordato de 1859: 3 y 4. Y la iglesia de Nuestra Sra. de Gracia no fue nunca enajenada por el Estado, quedando en la propiedad de la Iglesia.

«Por todo lo que dejamos expuesto hemos de pedir y atentamente pedimos dejen de aplicarse las disposiciones dictadas y que puedan dictarse contra los derechos de la Iglesia en este caso de la iglesia de Ntra. Sra. de Gracia, puesto que nada con ello se opone al cumplimiento de una ley civil, y por el contrario se atenta contra los derechos de la Iglesia con agravio a la Justicia.

«Dios guarde a V.E. muchos años.
«Ciudadela, 22 Septiembre 1932.
«JUAN, Obispo de Menorca.

«Excmo. Sr. Alcalde de Mahón.

«Como es de ver, en aquel escrito nuestro, éste, sin dejar de ir perfectamente razonado y fundado que bastara para que fuera reconocido el derecho de propiedad de la Iglesia sobre la mencionada de Ntra. Sra. de Gracia, actos posteriores ejecutados por aquella Autoridad Civil, Nos han dado a entender que

expuestos por el cardenal, aunque sin hacer alusión alguna

nuestra alegación no había sido apreciada en el justo valor que tiene, y que se mantiene por la Autoridad Civil el criterio de que es de la propiedad de la Municipalidad aquel tan devoto y concurrido templo. Siguiendo nuestra impugnación y reclamación, reiterando algunos de los conceptos ya emitidos, cabe y es justo ampliarlos y reforzarlos con nuevas razones y consideraciones. Y cabe preguntar: si la iglesia de Nuestra Señora no fue levantada ni costeada por la Municipalidad, sino que lo fue por donativos, limosnas y colectas, en términos que las cuentas de los gastos que se iban haciendo en la obra de edificación y construcción, de la Obrería, de censos, de donativos y limosnas, eran presentadas al Obispo para su aprobación; si va que en este procedimiento no puede la Municipalidad hallar fundamento para sostener su criterio; si tampoco puede fundamentarlo en alguna de las formas de contrato de los que transfieren el dominio de las cosas; si tampoco lo puede hallar en la Ley general de Desamortización, puesto que esta Ley no comprendió a esta iglesia de Nuestra Señora, que aunque la hubiera comprendido, quedaba en propiedad de la iglesia, porque el Concordato de 1851 que se llama a sí mismo Ley del Estado y perdurable, y el Convenio adicional de 1859, que confirma el primero, y declara de perfecta propiedad todos los bienes de la iglesia o no inculcados, o no enajenados que están todavía en poder del estado, con especial mención de las iglesias abiertas al culto público; que estos dos concordatos, repetimos, dejaron y está liquidada la Ley de desamortización, en tal manera que, toda acción que se promueva o se hubiera promovido, después de los Concordatos sobre tales bienes expuestos, ha de ser necesariamente ilegal y nula, puesto que sería demandar en asunto casado a estado de cosa juzgada; y si los Ayuntamientos no han tenido nunca, ni tienen ahora, derecho alguno de inmatriculación, que esta era exclusivamente función del Estado, sino que ellos fueron también incautados en sus bienes, corriendo los mismos peligros y sufriendo los mismos daños que la iglesia, cabe después de estos supuestos, ninguno de ellos venido a la realidad, reiterar la pregunta: en que título o títulos puede fundar la Autoridad Municipal de Mahón, el pretendido derecho a la propiedad y posesión de la iglesia de Nra. Sra. de Gracia, de la que solo tenía el uso por largueza de los Prelados Diocesanos, según dejamos bien determinado en la Comunicación de referencia al Excmo. Sr. Alcalde,

«Demás de todo lo expuesto, entrando en otro órden de consideraciones, cabe discurrir: secularizado el Cementerio, la iglesia en cuestión, no representa ya finalidad alguna para la Municipalidad; en cambio la tiene muy grande y especialísima para la Religión y su Iglesia Madre por el justo interés tan grande de mantener y dilatar la fervorosa devoción de los hijos de la ciudad de Mahón, y para no sepultar en el olvido la memoria, haciendo juntamente agravio a la misma, de tantísimas generaciones de Mahoneses que en siglos, vivieron y murieron a la sombra de Nra. Sra. de Gracia, a la que constantemente honraron con orrendas, esplendidas solemnidades y fiestas populares que siguen celebrándose. Por todo ello juzgamos que la Municipalidad haría bien, obra buena y de justicia, absteniéndose de toda pretensión sobre la iglesia de Nra. Señora de Gracia, propiedad de la Santa Iglesia, que Nos en todo tiempo estaremos en deber de vindicar.

«Ciudadela de Menorca, 12 de Octubre de 1932.»

EL OBISPO."

"Sección Civil.- Alegación y protesta". BOE de Carrazos y Tudela, año 21, 15 de enero de 1933, núm. 123, págs. 20-24.

al extremo sobre los oratorios y capillas."⁽¹⁴⁾

Pero a pesar de la urgencia en la aparición de las oportunas normas en desarrollo de la ley, que, consciente del estado conflictivo que la aplicación de la misma estaba creando, instaba el cardenal VIDAL a AZANA y de la buena disposición expresada por el presidente del gobierno, tendrían que transcurrir dos años antes de la aparición del correspondiente reglamento.

Tal reglamento, dictado el 8 de abril de 1933,⁽¹⁵⁾ vino a resolver muchas de las cuestiones planteadas entre las autoridades civiles y eclesiásticas, tales como la existencia o no de signos religiosos en los cementerios; la forma en que debía efectuarse la demolición de las tapias de separación entre los civiles y los confesionales; las normas para la incautación y expropiación de los cementerios parroquiales (extremos estos que habían dado lugar a numerosas protestas de la jerarquía, dada la actuación de muchas corporaciones municipales); los requisitos a cumplir en los cementerios privados y, por último, las distintas formas que podía revestir la declaración de voluntad sobre el carácter de enterramiento, entre las cuales, si bien se encontraba la del documento privado apuntada por el arzobispo de Iarragona, no se tenían en cuenta las restantes posibilidades que había sugerido y, en todo caso, suponían, contrariamente a las expresiones de buena voluntad de AZANA, una clara violencia a las costumbres de los católicos, ya que era este un requisito que nunca se había precisado anteriormente para tener un enterramiento religioso."⁽¹⁶⁾

(14) *Op. cit.*, págs. 642-643.

(15) *Gaceta de Madrid* de 12 de abril de 1933, núm. 102, págs. 279 y ss.

(16) Ver el apéndice núm. 2.

La declaración de enterramiento y los problemas que este nuevo formulismo creaba a los católicos había dado lugar, precisamente, a que entre la promulgación de la ley y la aparición de su reglamento, fuera dictada una restrictiva orden del ministerio de Justicia por la que, debido a la actuación de algunos notarios, se prohibía a estos, bajo multa de mil pesetas, la expedición de hojas para la declaración de enterramiento católico, dado que no era "lícito que funcionarios del Estado realicen tales actos de propaganda, contrarios a la Constitución vigente." (17)

(17) Orden ministerial de 14 de marzo de 1932:

"Ilmo. Sr.: El artículo 42 de la ley de 30 de enero último, exige una disposición expresa para que el enterramiento tenga carácter religioso, y, con este motivo, algunos Notarios han editado y puesto en circulación hojas impresas que contienen dicha disposición, hecha en favor de una determinada confesión religiosa.

"No es lícito que funcionarios del Estado realicen tales actos de propaganda, contrarios a la Constitución vigente. Y para que los Notarios guarden la más estricta neutralidad en cuestiones religiosas cuando se trate del ejercicio de sus funciones,

(Este Ministerio ha dispuesto lo siguiente:

1.º Los Notarios se abstendrán de circular y de ofrecer a los particulares hojas impresas o manuscritas que contengan la disposición expresa de carácter religioso del enterramiento a que se refiere el artículo 42 de la ley de 30 de enero de 1932. Igualmente se abstendrán, en el ejercicio de sus funciones, de realizar acto alguno de propaganda en pro o en contra de cualquier confesión religiosa.

2.º Las infracciones de lo dispuesto en el artículo anterior serán castigadas con la multa de 1.000 pesetas la primera vez y con la traslación forzosa en caso de reincidencia.

Lo digo a V.I. para su conocimiento y demás efectos,

Madrid, 14 de marzo de 1932.- ALVARO DE ALBORNOZ,

(Señor Director general de los Registros y del Notariado."

Gaceta de Madrid de 15 de mayo de 1932.

Esta norma, publicada en los distintos boletines eclesásticos y en el apéndice documental de ellos de 1932, mereció de los redactores de este apéndice la "natural y consiguiente protesta", indicando que su "carácter secularizador es funesto" (Documental, año 1932, núm. 9, pág.69)

Queremos señalar por ultimo y para finalizar el tratamiento de la normativa republicana sobre los enterramientos, que ni la ley ni el reglamento contenian alusion alguna -aunque el tema fuera citado incidentalmente en alguna intervencion parlamentaria en los debates sobre la ley- a la cuestion de la cremacion de los cadaveres, materia esta que tambien era frontalmente contraria a la doctrina eclesiastica de la epoca. La causa de ello era debida a que con anterioridad a la iniciacion de la discusion en las Cortes el 13 de enero de 1932, "'' el gobierno habia dictado un decreto por el que se autorizaba esta practica. ''"

(18) *D. de S.* núm. 98, pág. 14.

(19) Decreto de 8 de enero de 1932:

"Entre las numerosas disposiciones sobre policia sanitaria dictadas por los gobiernos anteriores al 14 de Abril de 1931, no existe ninguna que se refiriera a la posibilidad de cremación de cadáveres humanos. Esta práctica, corriente en todos los países civilizados, facilita la resolución de los problemas inherentes al ensanche de las grandes urbes, muchas veces dificultados por las enormes extensiones de terrenos próximos al núcleo de población, que es necesario habilitar para la práctica de los enterramientos. Asimismo, son innegables las ventajas que, desde el punto de vista higienico, ofrece la incineración para la destrucción de los cadáveres infecciosos, particularmente los de aquellas personas que fallecieron a consecuencia de enfermedades transmisibles por gérmenes que conservan en la tierra, durante largo tiempo, su virulencia.

"Por otra parte, puede ocurrir en alguna ocasión que un Municipio no disponga, dentro de su término municipal, de terrenos apropiados para cementerios, ya por su composición inadecuada para el proceso de la putrefacción cadavérica, o bien por existir en ellos grietas o fisuras que expongan a las aguas subterráneas al peligro de contaminación; inconvenientes que pudieran obviarse con la cremación.

"Además, el transporte de cenizas cadavéricas de una a otra localidad se efectuaría con más facilidad que el de cadáveres, y es otra consideración digna de tenerse en cuenta, en una época, como la presente, en que las necesidades de la vida obligan en muchos casos a la dispersión de la familia.

"No hay que olvidar tampoco que la superioridad higienica de este procedimiento sobre el de inhumación ha quedado demostrada en las más importantes guerras y grandes catástrofes mundiales que han tenido lugar últimamente. Resalta de todo ello el positivo beneficio que ha de reportar a la salud pública la generalización de esta costumbre, con lo que se justifica plenamente la promulgación de este Decreto.

"Por todo lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del

2. La actuación de la jerarquía eclesiástica.

2.1. Las primeras manifestaciones.

Como hemos indicado, la primera protesta por parte de los prelados españoles contra la legislación secularizadora de los cementerios fue la contenida en la exposición de agravios que, en nombre de los metropolitanos, elevó el cardenal SEGURA al presidente del gobierno provisional de la República.

de la Gobernación, decreto lo siguiente:

«Artículo 12. Todos los Ayuntamientos españoles podrán practicar en sus cementerios la incineración de los cadáveres humanos y de sus restos.

«Artículo 22. Para la realización de este servicio municipal será condición indispensable el disponer de las instalaciones adecuadas, que habrán de ser necesariamente autorizadas por la Dirección general de Sanidad, previo informe favorable del Consejo Nacional de Sanidad.

«Artículo 32. La incineración cadavérica sólo podrá ser practicada por expresa disposición del finado, por instancia de sus familiares o por no ser reclamado el cadáver, siendo en todo caso precisa la autorización del respectivo Juez municipal.

«Sin embargo, el Gobierno podrá establecer, mediante Decreto y por tiempo ilimitado, la obligatoriedad de la incineración cadavérica, justificada por la existencia de grandes epidemias o catástrofes, oyendo previamente al Consejo Nacional de Sanidad.

«Artículo 42. El traslado de cenizas procedentes de la cremación de cadáveres humanos, sea cual fuese la causa del fallecimiento, podrá hacerse en toda época y a cualquier distancia, sin intervención sanitaria alguna.

«Dado en Madrid a ocho de Enero de mil novecientos treinta y dos.»

Gaceta de Madrid de 9 de enero de 1932, núm. 9, pág. 228.

También con anterioridad a la Constitución aludieron los obispos de la provincia eclesiástica de Tarragona a la cuestión de los cementerios en el mensaje que, para expresar la postura de la Iglesia a las Cortes constituyentes, elevaron a estas el 19 de agosto de 1931.

Entre la exposición del primado de Toledo y este mensaje se había producido ya una actuación concreta del gobierno: el decreto de 9 de julio de 1931, y a él, si bien no expresamente, aludieron los prelados tarraconenses al defender el derecho exclusivo de la Iglesia sobre los cementerios (el decreto colocaba a los civiles bajo la única jurisdicción de las autoridades municipales) y sobre las sepulturas de sus fieles. También aludirían al derecho de poseer bienes sagrados, "como son los cementerios", exponiendo la doctrina eclesiástica ante la secularización que iba a debatirse próximamente en las Cortes y que acabaría plasmándose en el mencionado artículo 27 de la Constitución.¹²⁰

- (20) "Antes de pasar adelante, hemos de deplorar que el espíritu laicista tampoco deje en paz los sagrados huesos de los que descansaron en el Señor y esperan en la tierra santificada con las bendiciones de la Iglesia el supremo día de la resurrección de los difuntos. Porque hasta aquí ha llegado este furor, desconociendo los derechos de la Iglesia. Esta tiene el derecho exclusivo de construir, poseer y administrar cementerios, como lugares sagrados que son y deben serlo según los cánones; goza del derecho nativo y legítimo de adquirir y poseer, confirmado en el *Syllabus* al condenar la proposición que lo niega; derecho que en España corresponde a la Iglesia en virtud de las leyes concordadas y del mismo Código civil, que le reconoce sin limitación alguna el derecho de poseer, y de consiguiente a *fortiori* el de poseer bienes sagrados, como son los cementerios, que siempre se han considerado como parte integrante y accesoria de la Iglesia parroquial y de las otras Iglesias que gozan el derecho de sepultura. El nuevo Código canónico declara terminantemente que la Iglesia no entiende renunciar nunca a sus derechos de intervención sobre las sepulturas de los que fueron sus hijos y hoy son sus intercesores. Podrá resignarse a un despojo, si fuere alguna vez despojada; pero nunca dejará de reclamar su derecho."

Església i Estat durant la segona... I, págs. 224-244. Ver el epígrafe 4.1 del capítulo "La Constitución de 1931".

En la carta ya citada que, una vez transcurridos los debates constitucionales relativos a la cuestión religiosa, escribiera el 16 de octubre de 1931 el cardenal VIDAL al Secretario de Estado vaticano para informarle del desarrollo de las discusiones y de la aprobación de los artículos referentes a la Iglesia, al hablar de los puntos a tratar en la próxima conferencia de metropolitanos, indicaba, en un breve párrafo, que "de una manera especial sería interesante conocer los precedentes de los casos análogos al en que se va a encontrar la Iglesia en España para la secularización de los cementerios..." Y sería en estas mismas fechas -ya debatido el artículo 27- cuando el resto de la jerarquía española, si bien no tan masivamente como lo haría tras la aprobación de la "Ley de secularización de cementerios", comenzó a manifestarse sobre el tema.

El primer documento encontrado en dicho sentido fue la circular del obispo de Oviedo, Dr. Juan Bautista LUIS Y PEREZ que, con el título "Oremos por nuestros difuntos", tema muy propicio a las solemnidades religiosas de los primeros días del mes, abría el boletín eclesiástico de la diócesis de noviembre de 1931. Esta circular, dirigida a los fieles y fechada el 30 de octubre anterior, contenía en su primera parte una extensa exposición sobre las postrimerias, exhortando a rogar por los difuntos a fin de acortar el tiempo de sus sufrimientos en el purgatorio y era en su segunda parte cuando realizaba una apología del carácter sagrado de los cementerios, aludiendo tanto a los cánones que se referían a ellos como a la legislación española "cuya vigencia no sabemos que haya sido legalmente anulada":

"En España, aun prescindiendo del Derecho concordado, el Derecho Civil relativo a los Cementerios....:

(21) Op cit., págs. 385-401. Ver el epígrafe 8 del capítulo "La Constitución de 1931".

"12. Reconoce abiertamente el derecho de propiedad y de administración de la Iglesia sobre los cementerios parroquiales construidos con los fondos de Fabrica y limosnas de los fieles. (Nov. Rec. lib.I. tit.III, ley 12; ley 12, tit. XIII. Part. 12, Consejo de Estado 23 de Oct. 1846; R.O. 12 Mar. 1871; R.O. 19 Abril 1882).

"22. Establece, en caso de duda, la presunción a favor de la propiedad de la Iglesia. (R.O. 28 Abr. 1866).

"32. Determina que en los cementerios católicos llamados municipales por haberlos construido los municipios, las funciones administrativas de estos se ejerzan sin perjuicio de las religiosas que corresponden a la jurisdicción eclesiástica. (R.O. 1 Marzo 1907); y

"42. Dispone finalmente que para los no católicos se construyan cementerios civiles, independientes de los católicos o al menos separados de ellos por un "muro o cerca, como lo demas del cementerio, y que el acceso a los mismos se verificará por una puerta especial independiente." (R.O. 28 Feb. 1872; 2 Abr. 1883)."

El prelado hacia esta enumeración tanto como protesta del artículo 27 de la Constitución, casi acabado de aprobar, como para denunciar seguidamente que la normativa que citaba empezaba a ser violada por algunos municipios que "habían procedido a derribar los muros que separaban los cementerios civiles de los católicos y a inhumar en estos cadáveres que no podían tener sepultura sagrada según el derecho civil y canónico vigentes todavía". Y ello -en una interesante y acertada interpretación jurídica-, "so pretexto de recientes acuerdos de las Cortes Constituyentes, que no pueden considerarse en vigor mientras no sean debidamente promulgados".

Concluía la circular dando normas a los párrocos y encargados de parroquia en que tales hechos pudieran producirse, determinando:

"12. Que, aun cuando se trate de cementerios católicos municipales, apenas tengan noticia del acuerdo del Ayuntamiento respectivo de derribar el muro de separación del cementerio civil del católico, o del hecho del derribo del mismo, o de alguna inhumación indebida en sagrado, eleven ante el municipio respetuosa y razonada protesta de la infracción de los derechos espirituales de la Iglesia, de los religiosos allí enterrados y de los respectivos familiares supervivientes, dandonos inmediatamente cuenta de ello.

"22. Que si los hechos indicados se realizaran en cementerios parroquiales, cuya propiedad pertenece a la Iglesia, además de los indicado en el punto anterior, pidieran la oportuna autorización para entablar la correspondiente reclamación judicial.

"32 De las inhumaciones indebidas que se realicen en sagrado tomaran cuidadosamente nota detallada para proceder en su día a la exhumación del cadáver con arreglo a derecho." (22)

A esta circular, cuya segunda parte fue reproducida por otros boletines eclesiásticos,⁽²²⁾ siguieron otras que, en igual manera, describían la actuación de los ayuntamientos contra los cementerios católicos aun antes de haber sido promulgada la Constitución, según mas adelante veremos.

(22) 30 de octubre de 1931, "Circular núm. 10.- Sobre cementerios.- Damos por nuestros difuntos", BDE de Oviedo, año 67, 3 de noviembre de 1931, núm. 21, págs. 305-311.

(23) P.ej. BDE de Orihuela, año 50, 16 de noviembre de 1931, núm. 20, págs. 353-355.

2.2. La defensa de la existencia de los cementerios católicos.

2.2.1. Los escritos de los prelados: obispos y arzobispos de León, Tarragona, Tuy, Sevilla, Pamplona, Calahorra, Tarazona (administrador apostólico de Tudela) y Zamora.

La voz del episcopado español continuo elevandose ante la legislacion que venia a conculcar derechos consuetudinarios de la Iglesia sobre el entierro de sus fieles por medio de numerosos documentos cuyo contenido cabe resumir en la forma siguiente:

- a) Defensa de la existencia de los cementerios catolicos.
- b) Protestas contra el derribo de las tapias de separacion de los cementerios civiles y catolicos por parte de las autoridades municipales.
- c) Normas que habian de seguir los parrocos ante la incautacion de los cementerios parroquiales.
- d) Cementerios de religiosas.
- e) Derecho a la conduccion de los enterramientos catolicos.
- f) Declaración de voluntad que habian de efectuar los fieles sobre el caracter de su enterramiento, y
- g) Doctrina eclesiástica sobre la cremación de cadáveres.

La postura eclesiástica sobre estos extremos se manifestaría tanto a través de las distintas pastorales y circulares de los miembros del episcopado como de las normas que estos darían al clero o a los fieles a través de los vicarios generales de sus respectivas diócesis. Junto a estos documentos los boletines oficiales eclesiásticos también publicarían comentarios aislados a la doctrina canónica y no dejarían de reseñar las sentencias de las autoridades judiciales favorables a los derechos eclesiásticos, sistema indubitado para demostrar de que parte estaba la razón de los planteamientos que andaban en liza.

La piedra angular de la actitud eclesiástica en la cuestión de los cementerios tendría que basarse, lógicamente, en los principios que informaban la legislación canónica sobre el reposo final de los católicos: principios que serían expuestos por la jerarquía a fin de que los fieles y la nación toda comprendieran las sagradas razones que tenía en la defensa de sus derechos.

Así, muchas circulares que tenían por finalidad dar normas de actuación ante los abusos de los ayuntamientos o que eran únicamente un comentario de la legislación civil, comenzaban aludiendo al carácter sacrosanto del cementerio, mientras que, en otros casos, el documento -pastoral o circular- se refería únicamente a la exposición de los citados principios.

Tal sería la pastoral de 27 de noviembre de 1931 del Dr. José ALVAREZ MIRANDA, obispo de León, en la que, si bien aludía a otros temas, al referirse a los cementerios defendía la santidad de los católicos y la buena existencia del cementerio civil, señalando que en aquellos solo podían ser enterrados los dignos de sepultura eclesiástica mientras

que los otros "deben ser enterrados en el cementerio civil, sin que esto suponga ninguna ofensa ni agravio." Consideracion frontalmente contraria a la filosofia que inspiraba el articulo 27 de la Constitucion y que quedaria explicita en el preambulo del proyecto de ley de cementerios presentado a la Camara el 4 de diciembre de 1931 al aludir a "la situacion vejatoria a que se sometia al discrepante de la religion oficial en los momentos solemnes de la vida civil" y a que "ser disidente era motivo de sancion aun en la hora de la muerte, pues como tal se ha venido considerando la privacion de enterramiento en sagrado."'''

El fundamento del obispo de Leon para considerar que el entierro en cementerio civil no era ofensa ni agravio era que este era consecuencia de "los deseos de ellos, y aunque no lo hayan manifestado expresamente, así se supone con verdadero fundamento; porque es en conformidad con su modo de vida, con su proceder". Argumentacion sobre la vinculacion entre la forma de vida llevada y el caracter del enterramiento, aunque el difunto no hubiera hecho manifestacion expresa sobre el, que seria reiteradamente utilizada por la jerarquia en su protesta contra la necesidad de la declaracion de querer ser enterrado de acuerdo con la fe catolica, tal como ya lo hemos visto reflejado al hablar de la carta enviada por el cardenal VIDAL a AZANA el 14 de marzo de 1932.

Bien es cierto que en las fechas en que el Sr. ALVAREZ MIRANDA escribia su pastoral no habia aun una necesidad real de defender este razonamiento, toda vez que hasta que se aprobara la ley no existiria la obligacion de la declaracion expresa de voluntad sobre el caracter del enterramiento para que este pudiera ser de acuerdo con el

(24) Ver el apéndice núm. I.

rito católico," pero, en la misma línea de pensamiento que el resto de la jerarquía, defendía, a *sensu contrario*, la procedencia del enterramiento civil de aquellos que se habían separado de la Iglesia, en base a la línea de conducta que tal separación suponía. Sólo que más adelante -y aquí era donde se centraban los privilegios que la República quería abolir- pasaba a señalar que correspondía a la Iglesia, en última instancia, decidir acerca de dicha conducta.

Fras hacer una descripción de lo que, a la luz de la ley, era el cementerio civil que "ahora, algunos, inconscientes sin duda, pregonan como una de las ventajas o beneficios del actual régimen", señalaba que en él eran enterrados los cadáveres de las personas "como si fueran de seres irracionales", apuntando "lo poco que se aprecian los que eligen o quieren ser enterrados en el cementerio civil", pero destacando también el hecho de que "algunas veces los malos, sectarios y malos, que tanto odio tienen a los católicos, y que tanto los aborrecen y persiguen; que no quieren tomar parte en los de nuestro culto, y hasta procuran impedir su celebración, sin embargo quieren ser enterrados en el cementerio católico, ya porque tal era su voluntad, ya porque así lo quiere la familia, rehusando el cementerio civil". En estos casos, insistía el prelado, la decisión correspondía siempre a la autoridad eclesiástica, por muy "sensible y doloroso" que fuera para ella.

(25) También este razonamiento estaría presente en los debates parlamentarios de la ley y, así, sería esgrimido en las Cortes por el diputado GÓMEZ RUIZ al defender su voto particular de que se tuviera como manifestación expresa de ser enterrados católicamente, aun no consignándolo testamentariamente, a todos los fallecidos que, bautizados, continuaron en vida las prácticas de la religión católica, voto que fue rechazado, en votación nominal, por 123 votos contra 25. *D. de S.*, VI, núm. 101, 19 de enero de 1932, págs. 3265-3279.

Mas tambien junto a estos estaban los que pretendian que

"...todo sea laico, civil y profano, para borrar así la memoria del Cielo, al que no irán, y la del infierno, que temen y les horroriza, aunque aparenten incredulidad, y será su habitación para siempre, si no se arrepienten ¡pobres desgraciados que rín tan desastroso les aguarda!. Entonces no les valdrán las injusticias y falsos argumentos de que se valían en el mundo para sus impías y subversivas propagandas, y para cohonestar su escandaloso proceder, y sus iniquidades, arbitrariedades e injusticias.

«Por otra parte, a pesar de su egoísmo, se puede decir que aprecian poco su dignidad; porque rebajan al hombre a la condición de la bestia, como si no tuviera alma, que es la parte mas noble y principal, y que ha de vivir eternamente; y el cuerpo que tanto regalan, lo vienen a considerar como el de un animal cualquiera. Así es desgraciadamente, por mas que aparenten otra cosa.»

Estas palabras tan duras del Dr. ALVAREZ MIRANDA parecen excluir de sus consideraciones a aquellos que podían separarse de la Iglesia en forma silenciosa e individual para referirse a los que, por razones políticas, atentaban contra la doctrina religiosa, y, así, aprovechaba esta exposición sobre la diferencia entre el cementerio civil y el religioso y la distinta actitud de los que querían ser enterrados en uno u otro para acabar aludiendo a los que pretendían reformar la sociedad española en unas nuevas coordenadas de racionalismo y secularización, como queda claramente reflejado en la llamada que, con el marcado paternalismo de la jerarquía eclesiástica de la época, haría a los fieles -a los que quedaba prohibida cualquier opción de apertura a otros tipos de pensamiento- para que no se dejasen engañar

"...de esos propagandistas del laicismo y de la impiedad; porque hacen la guerra a la Iglesia y son enemigos de todo lo religioso.

Vienen por aquí para hacer proselitismo, celebrando sus mítines y conferencias, en los que profieren errores y herejías; os prometen muchas cosas, y bien sabéis como cumplen. No basta decir que no se da crédito a lo que dicen contra la religión; no se debe ir a oírlos, ni asistir a sus reuniones o asambleas, ni cooperar a sus fines, tampoco debéis leer su prensa ni ninguna clase de periódicos, impresos o sectarios, como ya tenemos dicho. Oíd la voz de la Iglesia, vuestra Madre y Maestra, que es la que os predica la verdad, procurando vuestro bienestar y felicidad, y la que verdaderamente se interesa por vosotros y por el bien de todos, pidiendo también por los que la persiguen y calumnian, y mucho deseamos y pedimos así mismo que todos nuestros amados hijos católicos sean enterrados en el Cementerio católico."

Hecho este inciso en su pastoral, que acababa con la frase transcrita para poder enlazar con el tema que en esta parte trataba, volvía el prelado a insistir en como la capiedad pretendía "obligar a que los fieles sean inhumados en el cementerio civil sin respeto alguno a su voluntad, y contrariando su libertad legítima" y a que "sean enterrados allí todos indistintamente, los católicos, los impres, los manometanos, los masones y los de cualquier secta, lo que repugna abiertamente a los sentimientos y creencias del pueblo español..."

Contra tal actitud defendía que se debía "dejar a la Iglesia el libre ejercicio de sus derechos, y no coartar la libertad de los católicos y de los demás ciudadanos en una cosa tan respetable y sagrada, y así cada uno será enterrado en el cementerio sagrado o profano, según sea su voluntad; esto es lo que debe hacerse", rotundas frases del prelado que, aisladamente consideradas, podían dar a entender que se decantaba por una total libertad de opción individual; ya hemos visto, sin embargo, como antes había dejado claramente apuntado que la decisión última sobre una y otra forma de

enterramiento dependía, en definitiva, de la Iglesia, derecho de esta cuya libertad de ejercicio debía ser, en última instancia, el que el obispo reclamaba, en clara contradicción con las palabras escritas a continuación. Por ello no hay que entender estas expresiones suyas como una posibilidad de opción derivada de una declaración expresa de voluntad individual, sino como resultado de una elección previa de forma de vida, en comunión o no con la Iglesia, de acuerdo con lo que esta entendiera por tal.¹²⁶

Para afianzar y clarificar la postura eclesial sobre el carácter que debían revestir los enterramientos, el obispo de León pasaba a narrar una anécdota carente de doctrina y que más parecía destinada a un ejemplo para colegiales que a una pastoral a sus diocesanos, prueba, una vez más, del paternalismo que presidía la actuación de muchos de los prelados españoles que, si por una parte hace pensar en el nivel cultural de los fieles o el que sus

(126) Esta interpretación viene claramente corroborada en la pastoral del cardenal VIDAL Y BARRAQUER que más adelante comentaremos, en la que se señalaba que los fieles "no pueden excluir a su arbitrio toda sepultura eclesial, pues se trata de cosa pertinente al derecho público que no puede mudarse por voluntad privada", y que es la Iglesia "la única competente" para decidir sobre ello. La argumentación del cardenal se refería al entierro de menores o sujetos a tutela (pues siempre habría que contemplar el hipotético caso de aquellos adultos que en el último momento de existencia rompieran con la Iglesia y quisieran, en consecuencia, entierro civil) pero dejaba claramente expuesta la doctrina de la Iglesia en este punto.

Frente a tal doctrina la República pretendió igualar a todos los ciudadanos en lo que atañía al lugar de sepultura de sus restos; con ello haría profundamente la tradición católica, confusamente interpretada por los políticos, como demuestra la intervención del presidente de la Comisión dictaminadora de la ley de Cementerios, SALAZAR ALONSO, que el 13 de enero de 1932, al hacer el resumen del debate del día, sostuvo que la Iglesia, en su tradición canónica, no tenía nada que oponer a un proyecto que admitía los ritos funerarios, pues había establecido que por el solo hecho de la bendición quedaba sagrado el lugar en que reposaba un cadáver, no queriendo establecer "una separación feroz, bárbara, entre los cadáveres sobre los cuales se hace la señal de la cruz y sobre los que no" y la ley, en definitiva, lo único que establecía era "la libertad en un mismo recinto de los ritos funerarios de todas las religiones" (DS, V, 13 de enero de 1932, núm. 99). Como vamos viendo la Iglesia no podía admitir tal concepción de los cementerios y los enterramientos.

pastores creían que tenían en su mayoría, por otra induce a meditar en las razones últimas de la propia jerarquía, sobre todo si tenemos en cuenta que, en el presente caso, el prelado deducía de su historia una de las razones por las que había que obedecer a la Iglesia:

"Recordamos que ha pocos años en un centro industrial de gran importancia, sito en una Diócesis muy religiosa, falleció uno de los principales, y como no era católico, determinaron hacerle entierro civil, y para mayor pompa trajeron un Pastor o ministro de la más alta categoría, se adornó con las insignias y preseas de la secta, y después del entierro aquella gran muchedumbre de miles de obreros, socialistas y comunistas en su inmensa mayoría, decía: 'que aquello no les había gustado; está mejor lo que hacen los curas en las parroquias, esto nos parece ridículo, y no lo queremos. Por eso recomendamos tanto obedecer a la Iglesia.'"

Dicho esto y tras una serie de consideraciones complementarias, el Dr. ALVAREZ MIRANDA finalizaba su pastoral elevando una oración para que los que deseaban la secularización de los cementerios salieran de su error "y mereciendo ser enterrados en el Cementerio católico, allí descansen en paz con los demás fieles hasta el día de la Resurrección." 27

Diametralmente distinta al nivel y razonamientos de esta pastoral sería la que, ya promulgada la ley de cementerios, dirigiría el cardenal VIDAL a sus diocesanos el 21 de febrero de 1932 y de la que, dada su relevancia, pasamos a ocuparnos detalladamente.

Tratada la cuestión como tema propicio del tiempo de Cuaresma, comenzaba el prelado aludiendo a la veneración

(27) 27 de noviembre de 1931, BOE de León, 1 de diciembre de 1931, núm. 22, págs. 573-602.

que tanto el pueblo hebreo como otros pueblos de la antigüedad tributaban a los despojos humanos, veneración que en los cristianos se acrecentaba ante la fe en la resurrección, razón por la que la Iglesia había pasado a ejercer "sus sagradas ceremonias sobre el cuerpo humano..." Refiriéndose al origen de los cementerios religiosos señalaba como en tiempos del imperio romano,

"Los cristianos, desde un principio, consideraron menos bien avenido con su fe que sus cuerpos descansasen mezclados con los cuerpos de los paganos. Por eso se fabricaron sus cementerios propios, separados de los cementerios y sepulcros de los gentiles, llegando a construir con grandisimos trabajos, para enterramiento exclusivo de los fieles, aquellos cementerios cristianos llamados catacumbas... Es a partir de esta época, y por tanto de los principios de la Iglesia, que notamos ya esta diferencia entre las necrópolis cristianas y las paganas."

Continuaba el cardenal describiendo como posteriormente, en los siglos V y VI había comenzado a evolucionar el emplazamiento de los cementerios permitiéndose que los fieles fueran enterrados cerca de los muros de las iglesias y pasando más tarde a enterrar en ellas a los obispos, abades y sacerdotes y, posteriormente, a los laicos nobles, hasta que en el siglo XI esta costumbre se hizo extensiva a todos los fieles,

"... primero junto al portico de la iglesia, más tarde bajo el pavimento. Por este motivo el cementerio vino a considerarse como parte accesoria de la iglesia; y ambas cosas, como un todo jurídica y moralmente. Y aun en los tiempos modernos, al construir los cementerios alejados de las iglesias, se ha conservado la union moral y jurídica de entrambos."

Defendiendo la existencia de los cementerios que así acababa de describir, aludía en el punto tercero de la pastoral al derecho, tanto de propiedad como de

jurisdicción, que sobre los mismos tenía la Iglesia, señalando como el Estado no solo debía respetar tales derechos sino, incluso, ayudarla a mantenerlos:

"Hay que distinguir bien, venerables hermanos y amados hijos Nuestros, el derecho de propiedad y el derecho de jurisdicción que tiene la Iglesia sobre los cementerios católicos. Ambos son entre sí distintos e independientes el uno del otro; ambos asimismo tienen su razón de ser en motivos diferentes.

"El derecho de propiedad lo proclama la Iglesia en el canon 1206,1, del Código de Derecho Canónico, donde se dice: 'La Iglesia tiene derecho a poseer cementerios propios.' Principio o disposición que pertenece al derecho público, ya que, siendo la Iglesia sociedad perfecta, le corresponde por eso mismo el derecho de poseer los medios necesarios y convenientes para conseguir su fin. Y precisamente, entre estos, la posesión de cementerios es medio convenientísimo para afianzar la fe en el dogma de la resurrección de la carne y de la comunión de los santos, como lo demuestra el simple hecho de que los adversarios de la Iglesia y enemigos de la obra de Jesucristo se han esforzado siempre en despojarla de esta propiedad, con el fin de amortiguar y extinguir, si posible fuese, en los fieles la fe en tan consoladores misterios."

Esta consideración del cementerio como testimonio real y constante de la fe en la resurrección y en la comunión de todos los fieles, vivos y difuntos, y el entenderla como la causa de que se pretendiera despojar a la Iglesia de su propiedad para ir en contra de la fe en estos dogmas, será reiteradamente expuesta por la jerarquía al reconocerse en la ley la posibilidad de incautación de los cementerios parroquiales por los municipios, ⁽²⁸⁾ lo cual no

(28) En los debates parlamentarios de la ley, si bien se expuso claramente el deseo de despojar a la Iglesia de unas prerrogativas y derechos tradicionales, se consideró, por una parte, que al permitir los ritos religiosos en el cementerio común se era lo suficientemente respetuoso con la fe de los creyentes, mientras que, por otra, no se fue directamente en contra del derecho de la Iglesia a poseer sus propios cementerios, toda vez que, si bien sería en el curso de los debates cuando se incorporó al proyecto de ley la posibilidad de

dejaba de implicar un atentado contra los derechos eclesiásticos, atentado ante el que el cardenal VIDAL pasaba a esgrimir sus argumentos:

"Este derecho es exclusivo en cuanto se refiere a los cementerios de los fieles católicos, y el Estado debe respetarlo.

"Los terrenos para sus cementerios puede adquirirlos la Iglesia por medio de algun título de dominio: compra, donación, etc.; y, si no pudiera, en una Nación de gran mayoría católica debería el Estado construir los cementerios, y cederlos en propiedad a la Iglesia, ya que esta tiene en tal caso el derecho a ser auxiliada por aquel, como sociedad perfecta que es, y de fin más elevado, al cual debe subordinarse el fin de la Sociedad civil."

No cabe duda que, pese a estas palabras del cardenal, la actuación de la República iba precisamente encaminada, a través de la legislación que incidía en los derechos y prerrogativas tradicionales de la Iglesia, a destruir y negar el hecho en que el autor de la pastoral basaba su argumentación, es decir, a acabar con la subordinación del Estado a esa sociedad perfecta llamada Iglesia, y, así, en el tema que nos ocupa, no solo estaba lejos del ánimo del Estado el coadyuvar a la adquisición o construcción de cementerios católicos, sino que incluso preveía la posibilidad de llegar a la expropiación de los que tenían tal carácter.

Frente a tal actitud la postura de la jerarquía era explícita y por ello el cardenal insistía, desde unas coordenadas únicamente basadas en principios eclesiásticos y carentes de fundamentación, en este caso, para una sociedad

incitación por los municipios de los cementerios parroquiales, se trataba precisamente de esto: de una posibilidad; pero ya el hecho de su reconocimiento legal implicaba, ciertamente, un atentado contra el derecho de propiedad de la Iglesia sobre sus cementerios que, además, en la práctica, se vería agudizado por la actuación de las autoridades municipales.

empeñada en gestar una nueva ideología laica, en cual había de ser la actuación del Estado en la hipótesis de un sistema en el que, como en esas fechas ocurría en España, la legislación vedara a la Iglesia la posibilidad de comprar, trayendo, además, a colación la posible existencia de un pacto entre ambas partes que, en el caso español, había sido de sobra y por la vía de hecho, reiteradamente ignorado:"

"Más aun en los países en que el Estado ha despojado a la Iglesia de sus bienes, reduciéndola a la imposibilidad de adquirir cementerios propios, no solo el Estado ha de construirlos a expensas suyas, sino que, de derecho y rigurosa justicia, debe entregarlos al dominio de la Iglesia, a no ser que por ley concordada se estipule lo contrario."

Así expuestos los argumentos en favor del derecho de propiedad que la Iglesia debía detentar sobre los cementerios en toda nación, aunque le estuviera vedada su construcción, el cardenal VIDAL descendía un escalón en su argumentación y, dejando ya apuntado como por ley concordada podía reservarse la autoridad civil la propiedad de los cementerios, pasaba a defender el derecho de jurisdicción que, en todo caso, correspondía a la Iglesia sobre cualquier recinto sagrado, aunque no poseyera el dominio del mismo, defensa que, nuevamente, enfocaba desde principios puramente eclesiásticos difícilmente asumibles por una sociedad laica:

"La jurisdicción compete a la Iglesia, por razón del carácter sagrado y religioso que tienen la sepultura y los cementerios. Esta jurisdicción, como distinta e independiente de la propiedad, la proclama la Iglesia en el Derecho Canónico, donde, al incluir entre los

(29) Como a lo largo de ese trabajo vamos viendo la legislación secularizadora de la Segunda República, entre ella la ley de cementerios, era, en realidad, una derogación no expresa del concordato de 1851.

lugares sagrados aquellos que, despues de bendecidos, se destinan a la sepultura de los fieles, añade en el canon 1560 estas precisas palabras: "Los lugares sagrados estan exentos de la jurisdiccion de la autoridad civil, y en ellos la autoridad legitima de la Iglesia ejerce libremente su jurisdiccion". Los cementerios católicos, pues, quedan en todo caso, aunque la propiedad pertenezca al Estado o al Municipio, bajo el libre gobierno de la Iglesia, exentos de la jurisdiccion civil, ya que llevan el sello de lo sagrado, que es el fundamento de esta jurisdiccion eclesiástica."

Una vez apuntados los argumentos eclesiasticos base de la defensa del derecho de jurisdiccion de la Iglesia, que el cardenal proclamaba, derecho contra el que primero -ya en el decreto de 9 de julio de 1931- y principalmente actuó la Republica, pasaba a describir la fundamentacion de tales argumentos, nacida del fin sobrenatural y de los dogmas -en este caso esencialmente los de la resurreccion de la carne y la comunión de los santos- que Jesucristo habia comunicado a su Iglesia, a la que encomendo con caracter exclusivo "la superintendencia y potestad sobre todas las cosas sagradas y religiosas". Seguidamente describia el cuidado de la Iglesia sobre los cuerpos de sus hijos "templos vivos del Espiritu Santo", razon por la que realizaba todos los ritos funerarios asi como la bendición solemne de los lugares destinados a cementerios. A continuación, pasaba a desarrollar los derechos derivados de los de propiedad y jurisdiccion eclesiástica antes expuestos: practicar ceremonias religiosas, admitir y reclamar los cadaveres dignos de sepultura eclesiástica y rechazar los indignos, entender en los casos de exhumación y traslado de cadáveres y en los de profanación y reconciliación, etc., puntualizando que "aunque el cementerio no fuere de propiedad de la Iglesia, debe el ministro por ella designado tener una llave del mismo y de la capilla, para el ejercicio libre de estos derechos."

A esta estar en posesión de la llave del cementerio habia hecho referencia, como hemos visto, el preambulo del decreto de 9 de julio de 1931,⁽³⁰⁾ si bien refiriendose exclusivamente a los de caracter civil y precisamente para negar la competencia de la Iglesia en la autorizacion de los enterramientos de tal caracter. Y era sobre el caracter de los enterramientos sobre lo que pasaba a hablar seguidamente el cardenal:

"Tambien es derivado del derecho de jurisdiccion eclesiastica, y, por tanto, independiente del derecho de propiedad, el de admitir y reclamar los cadáveres dignos de sepultura eclesiastica, y de rechazar los indignos,"⁽³¹⁾ en el que queremos insistir, ya que ha servido de pretexto a algunos para declararse en favor de la secularización de los cementerios en España. La privación de sepultura eclesiastica, impuesta por la Iglesia en ciertos casos -se ha dicho- es causa, para el finado y para su familia, de una deshonra e infamia, que solo con la secularización de los cementerios podrá remediarse, es decir, haciendo que la sepultura tenga para todos caracter civil, y que no haya lugar distinto para unos y otros."

El argumento -y a ello habia una referencia implicita el cardenal- habia sido esgrimido en la Camara y era el que informaba la filosofia de la ley tal como se habia recogido en el preambulo de su proyecto.⁽³²⁾ Para analizarlo y combatirlo el prelado queria demostrar la total divergencia del mismo con la doctrina eclesiastica, defendiendo los fundamentos que informaban los preceptos del derecho canonico:

(30) *...Las autoridades eclesiasticas, en algunas ciudades y pueblos de España, han creído que a ellas correspondia exclusivamente el derecho de guardar las llaves de los cementerios civiles...* (Ver la nota núm. 3)

(31) En bastardilla en el original.

(32) Ver el apéndice núm. 1.

"...siendo la sepultura eclesiástica sagrada por su naturaleza, un efecto a la vez y una señal de la comunión con la Iglesia Católica, pertenece por lo mismo al derecho público eclesiástico. Según esto, como anota el mismo Código, todos los cristianos han de recibir sepultura eclesiástica, a no ser que el derecho les prive de ella. De tal manera que, aunque pueden renunciar a una sepultura con pompa, no pueden excluir a su arbitrio toda sepultura eclesiástica, pues se trata de cosa pertinente al derecho público, que no puede mudarse por voluntad privada. De ahí que ni aun en casos de tutela y minoría puede renunciarse o impedirse por los representantes del difunto. No pueden, por consiguiente, tampoco los padres disponer que sus hijos bautizados, infantes o menores de edad, sean sepultados fuera del lugar sagrado. La única competente en esto es la Iglesia.

«Ahora bien, la Iglesia no priva de este derecho inherente a todo cristiano -del cual por se están privados los infieles-, si no es imponiendo esta privación como pena de algún delito. Los casos en que esto sucede están taxativamente enumerados en el canon 1240..."

Sin embargo, aun en estos casos la Iglesia era compasiva y benevolente y así se desprendía de la resolución del Santo Oficio a la que el cardenal aludía:

"La Santa Madre Iglesia, benigna y misericordiosa para con sus hijos, desea ardientemente que todos se salven. Nuestro Santísimo Señor el Papa... ha decretado poderse tolerar que gocen de sepultura eclesiástica, y se hagan por ellos preces y sufragios públicos, aquellos difuntos que en vida fueron miembros vivos de la Iglesia católica, aunque en el artículo de la muerte hubieran rechazado los sacramentos, con tal que se trasluzca cualquier esperanza, por mínima que sea, de que pudieron tener contrición de sus pecados y convertirse a Dios de corazón antes de morir."

Llevando hasta sus últimas consecuencias tal disposición eclesiástica, podía darse el caso de fallecidos -segua puntualizando el Dr. VIDAL- que hubieran roto

expresamente con la Iglesia en sus últimos momentos y cuyas familias aludieran a una posible conversión final con el fin de que, aun en contra de su voluntad, tuvieran entierro católico; en tales casos la decisión final correspondía a aquella, postura acerca de esta exclusiva competencia para decidir sobre el carácter de enterramiento, contra la que, como vamos destacando, sería dictada toda la legislación de la República sobre cementerios, la cual, al exigir la declaración expresa acerca del carácter de enterramiento para que este pudiera ser católico, extremo la defensa de la libertad de creencias y cultos de los ciudadanos y el afán de hacer desaparecer cualquier prerrogativa eclesiástica en este ámbito.

El cardenal explicaba como de la descrita potestad decisoria de la Iglesia se derivaba la secular costumbre de que en todos los cementerios destinados a los católicos, fueran municipales o parroquiales, existiera un lugar independiente del recinto sagrado o, dentro de él, debidamente aislado, destinado a atender al entierro de los indignos de sepultura religiosa o de los infieles, ya que, al ser los católicos "la inmensa mayoría o la casi totalidad del país, los casos excepcionales en que debe negarse o privarse de sepultura religiosa a los difuntos no son suficientes para justificar la existencia de otro cementerio."

Y, basándose en toda la exposición efectuada, pasaba a elevar finalmente su protesta ante la legislación civil que pretendía anular totalmente los derechos y potestades eclesiásticas:

"Después de todo lo expuesto, salta a la vista, venerables hermanos y amados hijos Nuestros, cuán injustamente pretenden justificar, como decíamos poco ha, la secularización de cementerios, y, más aun, su odio a la Religión.

«Es notoria la inconsecuencia con que se pretende despojar a la Iglesia de sus fundamentales derechos, a saber, del derecho de imponer penas inherentes a la potestad coercitiva, que le compete, en materia propia, como sociedad perfecta; del derecho de poseer cementerios propios, que ya hemos probado serle inalienable; y del derecho de jurisdicción y competencia, por la cual los cementerios para los católicos, aun los de propiedad civil, deben regirse por las leyes eclesiásticas. Y todo eso para evitar lo que ellos llaman deshonor de un particular o de una familia. Es decir que para no privar a un simple particular, a un miembro de la sociedad, de un derecho del que carece por culpa propia, se pretende privar a la Iglesia, toda una gran sociedad, de estos derechos tan fundamentales.

«Si, cuando la Iglesia priva a un impenitente de sepultura eclesiástica, tanto el como su familia quedan infamados, ¿quien es el responsable de este deshonor?. ¿Es acaso responsable el tribunal civil de la deshonor que al reo y a sus parientes se sigue cuando por delito es condenado a alguna pena?. A nadie se le ocurrirá semejante despropósito; y, no obstante, es lo que se pretende, en nuestro caso, del tribunal eclesiástico, o sea, de la misma Iglesia. El responsable es el que con su impenitencia ha merecido la pena, no el que hace cumplir el derecho, ni el que lo constituye.»

Como vemos, el Dr. VIDAL, a diferencia del Dr. ALVAREZ MIRANDA, que señalaba que el enterramiento civil decretado por la Iglesia no era "ofensa ni agravio; porque es según los deseos de ellos", reconocía, en línea con el preámbulo del proyecto de la ley, que era un deshonor para la católica sociedad española el entierro en cementerio civil; pero defendía la continuidad de la existencia de esta pena canónica toda vez que el acreedor a ella, "un simple particular, un miembro de la sociedad", la había merecido, en el mismo plano que el delincuente ante la sociedad civil.

Al igualar el lugar de enterramiento de todos los ciudadanos, la Republica privaba a la Iglesia de su potestad sancionadora en esta esfera, si bien, permitiendo los ritos religiosos ante cada sepultura, no dejaba de posibilitar el ejercicio de tal potestad, ya que la Iglesia bien podia no efectuarlos. Pero la desaparicion del cementerio catolico iba en contra de la secular separacion entre lugares de enterramiento sagrados y no sagrados establecida por el derecho canonico, lo que, aparte la sanción eclesiástica que el enterramiento en uno u otro lugar representaba para la fe en la vida eterna, era un aviso constante a los fieles acerca de las postrimerias, aviso cuya fuerza se diluia totalmente con la legislación republicana.

El cardenal entendia, ademas, que la existencia y la posibilidad de tal sancion no tenia en realidad la entidad que la Republica le queria atribuir, ya que

"...dadas las condiciones ... exigidas por la Iglesia para imponer dicha pena, se ve cuan raros han de ser -y son en realidad, como la experiencia lo demuestra- los casos de privacion de sepultura eclesiastica; no obstante lo cual, para que desaparezcan estas excepciones tan legítimas y justificadas, en vez de preocuparse de que desaparezcan las violaciones de la ley cristiana, que son su causa, quierese privar a innumerables catolicos del derecho a cementerio catolico, sustrayendo los cementerios al dominio y a la jurisdiccion de la Iglesia; y para evitar una supuesta deshonra, cuya responsabilidad pesa toda sobre quien la sufre, quierese obligar a todos los fieles a vivir y morir con la mengua de no ser sepultados en sagrado, conforme al derecho que les asiste como ciudadanos catolicos."

Asi argumentada la falta de justificación que para el cardenal tenia la nueva legislación- argumentación que descansaba principalmente en la oposición entre individuo y sociedad y, en la misma linea de pensamiento, entre las "excepciones" y la regla general- pasaba a analizar las

formas en que podian ser violados con las recientes normas los derechos de la Iglesia.

Al hablar del derecho de propiedad señalaba que la incautación, atentatoria del que poseia la Iglesia, podia igualmente lesionar otros derechos individuales adquiridos al amparo de la legislación anterior, tales como donaciones de terrenos, adquisicion de panteones en razon de que el cementerio era catolico, etc., impidiendo que se cumplieran las ultimas voluntades de muchos ciudadanos, lo cual seria "un abuso, que ninguna razon puede justificar."

No obstante, ante la posible violación de su derecho de propiedad, la Iglesia misma, "abandonando los beneficios temporales que de la propiedad y administración se le podian originar", pero "sin renunciar al derecho mismo -lo cual no puede hacer ya que (...) debe ser tal cual Jesucristo su Fundador la instituyo, con todas las prerrogativas de que fue por el revestida-", preveia la forma de atender los derechos espirituales de sus hijos, y, asi, disponia que si en algún lugar fuese violado el derecho de tener sus propios cementerios, se procuraria bendecir los de la sociedad civil, si los que en ellos habrian de enterrarse fueran en su mayor parte catolicos, o, al menos, que estos tuvieran una parte reservada y bendecida, y, en caso de que ni siquiera esto fuera factible, se bendecirian cada vez las sepulturas (canon 1206, parrafo 2).

Pero para la Iglesia, que asi defendia los derechos espirituales de los fieles, no era menos ofensiva la violación de su derecho de jurisdicción sobre los cementerios catolicos, violación que "manifiesta generalmente la tendencia antirreligiosa e impia, y el deseo de ir debilitando cada dia mas la fuerza divina de la

Iglesia y el espíritu sobrenatural de sus hijos para llevarlos paulatinamente al indiferentismo, a la irreligión y a la impiedad." Frases con las que el cardenal VIDAL insistía en su pensamiento -compartido por los demás miembros del episcopado, en algunos casos incluso más radicalmente-, sobre cual era la razón última de que se quisiera atentar contra los derechos de la Iglesia. Razón que, si bien era real en algún sector republicano, no puede considerarse como razón de la actitud secularizadora del nuevo régimen, el cual únicamente se apoyaba en la pretensión de despojar a la Iglesia, como institución, de una serie de prerrogativas tradicionales, pretensión esta que se extralimitó en muchos casos teniendo como consecuencia la aguda distorsión del problema religioso.

Esta extralimitación no dejaba de ser prevista por el arzobispo y, así, señalaba las secuelas que de la legislación sobre cementerios podían derivarse:

"Grave es, en este género de violaciones, aquella por la cual el Estado, además de incautarse de los cementerios propios de la Iglesia e impedir que se construyan otros nuevos, se arroga sobre ellos una jurisdicción completa y exclusiva, sujetándolos en su administración y gobierno únicamente a las leyes civiles; pero es gravísima, si de los cementerios y de los entierros se elimina cuanto tenga algún sabor religioso, o se convierten ambas cosas en alardes y manifestaciones de irreligión e impiedad."

Y, como aclaración de la posible intervención estatal y de las distintas consecuencias que esta podía tener, según fuera o no respetuosa con la Iglesia, pasaba a señalar que eran justas todas aquellas leyes que, aun suponiendo una intervención en la administración de los cementerios, tendían a su higiene, orden y salubridad; en cuyo caso la Iglesia se apropiaba de todas estas normas canonizándolas a fin de evitar discrepancias entre ambas esferas de jurisdicción y tendiendo siempre a la armonía entre los

podere civiles y eclesiasticos.

Expuesta la doctrina sobre el tema en esta extensa pastoral, el arzobispo indicaria a sus diocesanos que habia querido transmitirsela para que

"...impuestos, como catolicos, de la misma, y concedores de los derechos que os corresponden, procureis se hagan estos efectivos por todos los medios que esten a vuestro alcance y la prudencia os aconseje; y mas despues de publicada la reciente Ley sobre secularización de cementerios, que ha producido en Nuestro corazon de Prelado profunda impresion de dolor, y Nos obliga a hacer pública Nuestra protesta, por constituir una nueva vulneración de los derechos de la Iglesia y de los derechos de las almas, que son los derechos de Dios, como ha dicho recientemente el Romano Pontífice."

Por último, y tras aludir a la declaración de enterramiento que los católicos debian efectuar, lamentaba la situación de la Iglesia en España y calificaba de "dura" la nueva ley, terminando por hacer una llamada a las autoridades civiles -exhortación que en las pastorales de otros miembros de la jerarquia, como veremos, no aparece- para que evitaran todo posible conflicto; cerrando la pastoral con una nueva alusión al tiempo de Cuaresma en la que proponia a los fieles como tema de meditacion la figura del cementerio, al que calificaba de signo del esperanza en la resurrección. "..."

No tan extensas como la pastoral del cardenal VIDAL serian las dirigidas a sus diocesanos por el obispo de Tuy, Dr. Antonio GARCÍA y GARCÍA, en 21 de febrero de 1932, por el arzobispo de Sevilla, Dr. Eustaquio ILUNDAIN, el 6 de

(33) 21 de febrero de 1932, "Pastoral de Cuaresma", BOE de Tarragona, año 42, 29 de febrero de 1932, núm. 30, págs. 529-575, También en *Església i Estat durant la segona...*, II, págs. 562-580.

marzo de 1932, por el obispo de Pamplona, Dr. TOMAS MUÑOZ PABLOS, en 7 de marzo y por el de Calahorra, Dr. Fidel GARCIA MARTINEZ, el día 17 del mismo mes. De gran extension, como no podia ser menos, seria la que el obispo de Tarazona y administrador apostolico de Tudela, Dr. Isidro GOMA Y TOMAS, suscribio el 30 de marzo de 1932.

La del obispo de Luy, con el titulo "Instruccion pastoral acerca de los cementerios y protesta razonada sobre la secularizacion de los mismos", hacia referencia a la constante marcha hacia el laicismo que suponía la nueva legislacion, hecho ante el que un obispo debía "protestar una y otra vez en nombre de los derechos de Dios y de las almas", y, para que esta protesta tuviera "mas valor y eficacia constructiva", exponia, como fundamento de la misma, la doctrina y leyes de la Iglesia, defendiendo, en base a ellas, la existencia del cementerio católico y aludiendo a la razón -que ya hemos visto apuntada por VIDAL- de los ataques contra el mismo.

"No es el cementerio un pudridero y nada más. El cementerio católico es un predicador perenne, constante, de las verdades mas trascendentales del orden espiritual, y esto explica la aversion que los hombres impíos e irreligiosos han tenido y profesado, tienen y profesan a los cementerios católicos, y el afán que los domina de secularizacion, para que dejen los cementerios de predicar las verdades mas trascendentales del orden religioso, verdades que a los hombres perversos y descreídos y a los indiferentes tanto les duelen y amargan.

"Y porque el cementerio católico proclama, con divino clamor, todas estas enseñanzas, es por lo que la Santa Iglesia tiene tanto interes y con tanto ahinco vindica sus derecho sobre los cementerios católicos y no quiere y condena que sean secularizados los cementerios en que reciben sepultura los cadáveres de los fieles cristianos.

Seguia exponiendo la legislacion canonica sobre los cementerios y, transcritos y comentados todos los canones,⁽³⁴⁾ pasaba a quejarse de la nueva situacion española.

"Triste cosa es que en España hayamos llegado a la violacion del derecho que a la Iglesia asiste de tener sus cementerios propios, y que los cementerios propiedad de la sociedad civil hayan sido secularizados en la forma que puede verse en la ley de secularizacion de cementerios..., siendo como son mayoria notabilisima, casi totalidad, los cadáveres de catolicos que en los cementerios españoles reciben sepultura..."

Comentaba despues la reciente ley --"guardados los respetos debidos a la autoridad, pero guardados tambien los respetos debidos a la verdad y al derecho de la Iglesia católica, que tambien es sociedad perfecta y soberana en el orden espiritual y religioso"-- señalando como

"El cementerio es la ampliación connatural del templo: van al cementerio católico los que iban al templo católico; no van al cementerio católico los que no quisieron ir al templo católico como hijos fieles de la Iglesia Católica. La separación, pues, del cementerio católico del no católico no es hija del odio de los católicos contra los no católicos, sino que es hija de la voluntad y acaso de la mala voluntad y del menosprecio y desobediencia de los no católicos al mandato de Jesucristo que impone la obligación de ser católicos."⁽³⁵⁾

El arzobispo de Sevilla, cardenal ILUNDAIN, comenzaba, por su parte, su "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles" enumerando todos los derechos de la Iglesia en estos ámbitos así como su

(34) Ver el apéndice núm. 10.

(35) 24 de febrero de 1932, "Instrucción pastoral acerca de los Cementerios y protesta razonada sobre la secularización de los mismos". BDE de Iuy, año 73, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 71-90.

fundamento, para lo cual seguía la misma línea de argumentación que vamos viendo reflejada en los documentos de los demás miembros del episcopado:

"El espíritu laico y secularizador ha dado un avance mas y de gran trascendencia, invadiendo la órbita de los derechos de la Iglesia católica nuestra madre; cuyos derechos no provienen de origen humano, sino del mismo Jesucristo que fundó la Iglesia católica. Desde sus primeros tiempos tuvo la Iglesia sus catacumbas de Roma y de otras ciudades antiquísimas, en las cuales eran sepultados los cadáveres de los fieles con ritos y ceremonias sagradas. La Iglesia tiene derecho a poseer cementerios propios para sepultar en ellos a los que mueren en el seno y comunión cristiana. El dogma de la comunión de los santos y el de la inmortalidad del alma lo fundamentan. En los cementerios bendecidos con rito religioso ejerce la Iglesia plena jurisdicción y autoridad. Es también derecho de la santa Iglesia católica conducir los cadáveres de los fieles hijos suyos al lugar de su sepultura con solemne rito y con acompañamiento de sacerdotes y cantos sagrados. Asimismo, tiene la Iglesia derecho a excluir del lugar donde son sepultados los cadáveres de los fieles, los de aquellos que murieron fuera de su seno, los de los infieles, los no bautizados, los herejes, los apóstatas, los excomulgados, los pecadores públicos que mueren sin dar señales de arrepentimiento y los de los que, aun estando bautizados, murieron adictos a sectas condenadas por la Iglesia."

Y ante la violación de todos estos derechos llevada a cabo por la nueva legislación de la República, elevaba el arzobispo su protesta:

"Nos no podemos dejar de consignar Nuestro dolor y reclamación consiguiente por el agravio que se ha inferido a los sacrosantos derechos de la Iglesia católica, herida nuevamente en el ejercicio de su augusta misión y de sus sagradas atribuciones." (36)

(36) 6 de marzo de 1932, "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles", BDE de Sevilla, año 75, 7 de marzo de 1932, núm. 1201, págs. 92-97. Reproducida en el BDE de Tenerife, 1932, marzo y abril, núms. 3 y 4, págs. 37-44.

En la instrucción pastoral que el obispo de Pamplona dirigía a los fieles con motivo de la festividad de la Resurrección hablaría, si bien incidentalmente, del carácter sacrosanto del cementerio:

"Con este espíritu de fe, amados diocesanos, con este criterio sobrenatural debemos mirar a la muerte. Con ese mismo criterio, en estos días de laicismo universal, debemos mirar lo que con la muerte se relaciona, muy particularmente el lugar en que han de descansar nuestros restos hasta el día de la resurrección. A ese lugar le dio la piedad cristiana el nombre de Cementerio, que quiere decir dormitorio, lugar de pasajero reposo; recordándonos el dogma de la resurrección de la carne; también lo llamo Campo Santo, no sólo por la bendición de la Iglesia, sino también porque en él se da tierra a los santos, porque han sido templos vivos de Dios. Pues bien, aunque el mundo laico quiera convertir ese lugar en una oficina y profanarlo y arrancarle todo carácter de santidad, sea siempre para nosotros lo que realmente es, el lugar en que esperamos la resurrección, un lugar santo, tan sagrado como las iglesias mismas." (37)

El obispo de Calahorra, Dr. Fidel GARCÍA MARTÍNEZ, escribiría también una pastoral dedicada íntegramente al tema de los cementerios y enterramientos. Comenzaba aludiendo al ateísmo implícito en la nueva ley, que al ser otra transgresión de los derechos de la Iglesia, era, según decía y como ya hemos visto interpretado por el Dr. ALVAREZ MIRANDA, un intento más de desterrar a Dios de la vida de los hombres:

"La reciente Ley, de 30 de enero último, llamada de secularización de cementerios, constituye una nueva violación de los sagrados derechos de la Iglesia y de la conciencia cristiana y una forma más del laicismo estrecho y sectario, que no es otra cosa que el ateísmo práctico, empeñado en desterrar a Dios de todas las manifestaciones de la vida del hombre, y aun de las más solemnes de

(37) 7 de marzo de 1932, "Alocución pastoral que el Excmo. Sr. Obispo dirige a sus diocesanos con motivo de la fiesta de la Resurrección del Señor", BDE de Pamplona, año 71, 15 de marzo de 1932, núm. 1729, págs. 81-87.

la muerte; a ese Dios, que es la única realidad indestructible y augusta que todo lo llena y el principio soberano de toda verdad, de todo bien y de todo derecho."

Fras hacer, como el cardenal VIDAL, una introducción sobre la evolución histórica de los cementerios católicos, defendía su existencia en base a los fundamentos sobrenaturales que ya hemos visto expuestos por otros prelados:

"Este dogma católico de la resurrección de la carne, el complejo y riquísimo de nuestra elevación y santificación sobrenaturales y de la comunión de los santos, junto con el de la constitución divina de la Iglesia como sociedad perfecta y soberana, son los fundamentos teológicos y jurídicos, perpetuamente indestructibles, del derecho de esa misma Iglesia, y como consecuencia, de nosotros sus hijos a poseer cementerios propios, bendecidos y separados de todo otro lugar meramente civil o profano, y a que nuestro cadáver reciba en ellos cristiana sepultura."

Y, al igual que el Dr. GARCIA y GARCIA, desarrollaba la idea del cementerio como continuación del templo, si bien basándose en diferentes consideraciones:

"Es, pues, el cementerio, el camposanto, como una prolongación del templo. Imploramos en este la intercesión de nuestros hermanos del cielo, cuyas imágenes veneramos en los altares; oramos en aquél por nuestros hermanos del purgatorio, cuyos cuerpos están allí sepultados."

Esta oración era debida a la fe de los católicos en la resurrección:

"Cuerpos no montones tan solo, como los de los brutos, de polvo y ceniza, sino semilla de vida espiritual superior, que dice el Apostol (I Corint. XV-44), llamados por el dogma de la resurrección de la carne a unirse de nuevo, en un vivir inmortal y mejor, con el alma que un día los informara, cuyo instrumento fueron para las obras buenas y de cuya santidad participaron:... elevados, en una palabras, al orden sobrenatural

por todo ese conjunto de excelsas maravillas que comprende el dogma de la santificación cristiana.

"¿Quién puede extrañarse de que una religión, que tales verdades profesa, obre conforme a ellas y mire como lugares sagrados sus cementerios y se resista a verlos secularizados y profanados?."

Siendo la Iglesia una sociedad perfecta y aun superior al Estado, entendia el obispo que solo el sectarismo o el desconocimiento podian haber llevado a este a la negacion de sus derechos:

"Si del dogma de la constitucion divina de la Iglesia resulta que es esta una sociedad perfecta y soberana, independiente del Estado temporal y aun superior a este, y si es inseparable de toda sociedad perfecta el derecho a todos aquellos medios necesarios o conducentes a su fin, ¿como puede este Estado discutir o negar a la Iglesia el derecho a poseer y administrar sus cementerios en la unica forma que lógicamente responde a sus creencias y a su mision?."

"Solo perjuicios sectarios o desconocimiento de la doctrina catolica y de la naturaleza de la Iglesia han podido dar origen a hostilidades contra los cementerios eclesiasticos."

Pero, como seguia analizando, habia otra razon que podia haber conducido a la secularizacion de los cementerios, razon que era el primer prelado, entre los consultados, en apuntar:

"¿Que de su existencia puede seguirse en alguna ocasion que en muerte yazgan separados los que estuvieron unidos por lazos de convivencia o de sangre?. Aparte de que cabe retorcer el argumento, señalando como muy natural el que continuen separados en muerte los que lo estuvieron en vida por divisiones tan intimas y profundas como las de creencias y sentimientos religiosos, todo pretexto razonable cae por su base desde el momento en que aquella separacion del sepulcro es solo una consecuencia de libres determinaciones de los propios interesados. El pertenecer o no a la Iglesia Católica, el ser o no fiel hijo de esta y con derecho, por lo mismo, a sepultura en sagrado, de la voluntaria eleccion

de cada uno depende. El que libremente, pues, se abstiene de entrar en la Iglesia o renuncia a su condicion de catolico ¿con que razon ha podido quejarse de que se le nieguen las consideraciones reservadas a esa condicion?. Y menos, si cabe, ¿con que derecho puede oponerse a que otros elijan para si aquello a que el ha renunciado?. Porque unos cuantos, pocos o muchos, prefieren ser enterrados civilmente y en lugar profano, ¿va a privarsenos a los catolicos del perfecto derecho que tenemos a ser sepultados en lugar sagrado y conforme a nuestras creencias?."

Aparte de destacar que, como ha quedado recogido, para el obispo de Calahorra -a diferencia del cardenal VIDAL, que insistia en el carácter minoritario del hecho-, era indiferente que fueran pocos o muchos los que, por su forma de vida, recibieran sepultura civil, es interesante apuntar que la idea mantenida por el Dr. GARCIA MARTINEZ de que la separacion final de aquellos que estuvieron unidos en vida habia de ser consecuencia logica de su previa eleccion, dentro o fuera de la Iglesia, respondia al tema central de varias de las intervenciones parlamentarias en los debates sobre el proyecto de ley, entre las que destaca la del catolico OSSORIO Y GALLARDO que defendierla la secularización de cementerios citando a Gumersindo AZCARATE: "¿Por que he de reposar yo despues de muerto separado de mi mujer, con quien tan unido vivi en vida?". (***) Para el Dr. GARCIA, contrariamente, si la caridad u otros motivos podian justificar la unión en vida con los no creyentes, el limite de esta actitud pasaba a ser infranqueable, precisa, paradójica y rotundamente, con la muerte:

"La caridad, la tolerancia cristiana u otros deberes especiales que pueden justificar en ciertos casos la convivencia con los no católicos, no justifican la union en la muerte

con los mismos."

No podían faltar entre estas voces las prolíficas ideas del Dr. GOMA que, como era de esperar, dada su vocación a opinar extensamente de todos los hechos y acontecimientos, suscribió el 30 de marzo de 1932 una larga pastoral bajo el título "El laicismo postumo" relativa a cementerios y sepulturas. Se dividía el documento en varios epígrafes: 1. El sentido cristiano de la muerte: El cadáver; 2. El cementerio; 3. Cremación o incineración de cadáveres; 4. Sepultura eclesiástica, y 5. Normas prácticas, que encerraban una serie de orientaciones y puntualizaciones sobre los extremos anteriores. Los dos primeros epígrafes citados venían a compendiar las razones que arguía el prelado en defensa de la existencia del cementerio católico.

Comenzaba así el documento quejándose de como con el intervalo escaso de un mes se habían publicado en ese año dos decretos, uno rechado el 5 de enero, sobre incineración de cadáveres, y otro el 6 de febrero, sobre secularización de cementerios, puntualización en la que, extranamente, el Dr. GOMA, siempre tan preciso, venía a coniundir la fecha de la ley con la de su publicación en la *Gaceta de Madrid*. Mas lo importante de esta introducción era su interés en dejar constancia de como "a cada disposición legal atentatoria contra la doctrina o los derechos de la Iglesia hemos contrapuesto las enseñanzas de nuestra santísima Madre"; espíritu batallador siempre presente del prelado, que ahora fundamentaba cara a los fieles a fin de que "os preservemos a lo menos de la corrupción mental, la mas lamentable de todas, por cuanto las verdades de la fe son normativas de la vida cristiana".

(39) 17 de marzo de 1932, "Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos", BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 22 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 49-58.

Las consecuencias de la legislación republicana eran obvias para el obispo, "al laicismo de la vida debía seguir la laización de la muerte y de los lugares en que se alberga"; para él estaba clara la postura y la actuación del nuevo régimen que describía con estas contundentes y, sin duda, exageradas palabras carentes de la dulzura y matizaciones del arzobispo de Tarragona:

"Por esto los enemigos de la vida cristiana, de la fe, de la esperanza, del amor cristianos, después de haber suprimido a Dios de la vida del Estado y de los organismos oficiales subalternos, la escuela, la familia, la vida ciudadana, debían penetrar en el santuario de la muerte y arrancarla, cuanto está de su parte, de las manos de Dios y de su Iglesia."

Dados los principios de fe que para los cristianos sustentaban la idea de la muerte y, en relación con ellos, el carácter que atribuían al recinto sagrado de los cementerios, no dudaba el Dr. GOMA en afirmar que en la promulgación de las citadas normas el legislador había procedido "llevado de un apriorismo doctrinal totalmente destrabado de la realidad de la vida española", tal como había sucedido con el resto de la legislación secularizadora dictada por la República; a pesar de lo cual -y desmintiendo esa fe, tantas veces proclamada por el episcopado, en la integridad de doctrina y de costumbres de los católicos españoles- manifestaba su temor ante el peso que en la sociedad podían tener estas nuevas regulaciones: "Pero la ley es ley, y lentamente hará su camino: tiene el prestigio de toda ley, tendrá en no pocos casos la fuerza del sectarismo que cuida de aplicarla y ha encontrado, como otras leyes, el campo abonado en la ignorancia y en la indiferencia del pueblo católico."

Para aminorar, pues, en lo posible, los efectos que sobre el pueblo fiel pudieran tener las nuevas disposiciones, quería el prelado recordar la doctrina

eclesiástica sobre las postrimerias, comenzando por explicar el significado que para el cristianismo tenía la muerte con una larga exégesis que, sin dejar de recordar el carácter sagrado que en todas las culturas detentaban tanto los cadáveres como el lugar en que se les daba sepultura, culminaba en el dogma de la resurrección, en base a lo cual venía, lógicamente, a argumentar su defensa de la existencia del cementerio católico, que comenzaba, como había hecho el cardenal VIDAL, haciendo un recorrido histórico desde sus orígenes pero con una singular insistencia en la forma en que en la Iglesia, "verdadera familia espiritual, con comunión íntima entre sus miembros", había predominado algún tiempo el sentido de convivencia de los vivos con los muertos. Esta realidad no sólo se ejemplificaba en las catacumbas, "templos y cementerios", sino también en muchas iglesias -aunque, decía, y es el único caso en que hemos encontrado esta afirmación, que ignoramos si respondía a un deseo de actualización de unas normas que no podían estar vigentes en tiempos pasados o al de proclamar la modernización de la cultura eclesiástica a tenor de las normas sanitarias contemporáneas, "disintiendo el Derecho eclesiástico"- iglesias, en las que habían sido enterrados sus religiosos, hasta que más tarde, como aun perduraba en algunas parroquias, el cementerio había sido adosado al templo, simbolizando, en un solo recinto, la unidad de la Iglesia.

Por todo ello, y pese al recordatorio anterior sobre el carácter sagrado de las sepulturas en todas las civilizaciones, pasaba a proclamar, con cierta contradicción, que "el cementerio es nuestro", ya que incluso tal nombre, ajeno por completo a los de otras culturas, había sido creado por el catolicismo: "lugar de dormición", era una creación "absolutamente cristiana", era un "recinto sagrado, donde se conservan cuerpos también

sagrados", ya que estos habian sido bautizados y habian sido morada del Espiritu Santo.

Este hilo de pensamiento llevaria al Dr. GOMA a dar la caracterizacion del cementerio, cosa que, si hacia con carácter generico atribuyendole en todo caso la representacion de los atributos de santidad, descanso pacifico e inmortalidad futura, es obvio que solo podia hablar en estos terminos del cementerio cristiano. La ingerencia estatal en tales cementerios tenia las consecuencias que seguidamente señalaba:

"Por todo esto, "laicizar" [sic] un cementerio católico, y en nuestra España lo han sido casi todos hasta ahora, es desnaturalizarlo y profanarlo; es inferir violencia a la paz de los muertos; es promiscuar los cuerpos de los santos -porque todos los que allí están han tenido la vocación de la santidad- con los no santos, herejes, excomulgados o paganos.

« Municipalizar el cementerio es arrancarlo de manos de la Iglesia que, aun prescindiendo del derecho de propiedad que puede alegar sobre gran parte de ellos, por títulos de orden civil y canónico, tiene sobre la totalidad de ellos una jurisdicción que arranca de la consagración o bendición de aquellos santos lugares y de la profesión de fe y de la vida cristiana de sus hijos en ellos sepultados. Es inferir agravio a estos, que entregaron sus cadáveres en los brazos amorosos de la Iglesia para que los amparara y guardara sus tumbas, no en manos del Estado, a quien nadie llamo jamás para una función que, bajo todo cielo, ha sido un acto íntimo de la vida doméstica o una función pública de religión.

« Secularizar el cementerio es lanzar a Dios de un recinto donde Dios, como en los templos, de los que el cementerio cristiano es una prolongación, tiene una inhabitación especial, por la dedicación del lugar, por la capilla que suele tener su recinto, por la santificación del cuerpo humano del que es morada, por la Cruz bendita que, en lugar visible y como bandera santa de la única religión verdadera, lo preside."

Y, tras esta descripción del significado que, según el prelado, debía tener para los fieles el objeto de la nueva ley, añadía unas durísimas frases, juicio que le merecía la actitud seguida por la República:

"...cuando no se teme a Dios y se odia a la Iglesia, sociedad divina y sociedad con Dios, no hay que esperar más que atropellos contra los hijos de Dios por parte de quienes, en nombre de una soberanía y de una omnipotencia absurda, se han propuesto eliminar a Dios del orden social y sojuzgar la Iglesia a la autocracia del poder civil."

En contra de la realidad así descrita el Dr. GOMA defendía la potestad soberana de la Iglesia, y, para ello, pasaba seguidamente a preguntarse si la determinación del carácter del entierro era un derecho y, de serlo, a quien correspondía, para afirmar que se trataba de un derecho del propio difunto, que incluso la nueva ley de la República reconocía en parte, de ahí que en esta cuestión debiera prevalecer la voluntad previamente declarada por él.

"La sepultura es un derecho del propio difunto, en sentido pasivo, por cuanto es cosa contraria a las costumbres de todos los pueblos el dejar los cadáveres insepultos; la misma naturaleza parece clamar por un espacio de tierra que reciba nuestros cadáveres. ¿quien dará sepultura al difunto y señalará la forma de ella? El difunto pudo en vida elegir lugar y forma de sepultura; toda civilización digna de tal nombre ha reconocido este derecho; el mismo artículo 42 de la reciente ley sobre cementerios lo reconoce en parte. La razón está en que nada hay más propio de la persona humana que el propio cuerpo, y debe prevalecer la voluntad previamente declarada por el difunto mientras, como en el caso de la cremación, no se atraviesen intereses superiores a los individuales."

Pero si el fallecido no hubiera hecho expresión alguna sobre su deseo de sepultura ¿a quién correspondía determinar esta?. Para el Dr. GOMA prevalecía clarísimamente

lo que denominaba "el derecho de la sociedad religiosa", en base al simple razonamiento, discutible para un no creyente, de la prevalencia de los intereses espirituales sobre cualesquiera otros, intereses que, además, no podían ser otros para el obispo que los que dimanaban de la fe católica y, de ahí, la potestad última de la Iglesia en esta cuestión:

"Pero si el difunto no ha declarado su voluntad porque no ha querido, porque no se ha preocupado de ello, como ha ocurrido generalmente hasta ahora, o por incapacidad, como en caso de demencia, según se previene en el citado artículo de la reciente ley o en el más general de falta de discernimiento, ¿quién tendrá el derecho de señalar forma y lugar de sepultura?"

"Nosotros decimos que prevalece el derecho de la sociedad religiosa, en nuestro caso el de la Iglesia, sobre todo otro derecho. Es obvia la razón para quienes conocen la jerarquía de los valores humanos y la de las sociedades. Los intereses primordiales son los del alma que, según el Evangelio, es más que el cuerpo y más que el vestido; la sociedad superior a todas es la espiritual, que tiene por objeto guiar al hombre a sus destinos definitivos; toda la vida, en el orden individual y social, debe ser presidida y gobernada por quien tenga la misión de ordenarla a su fin último. Por lo mismo, siempre que se atraviere la necesidad o la simple conveniencia de los fines espirituales es la sociedad espiritual, la Iglesia, la que tiene el derecho de darnos normas, para vivir y para morir. Sociedad perfecta y superior como es la Iglesia, independiente de toda sociedad civil en lo que atañe a sus fines específicos, a ella toca, por derecho propio y nativo, acotar un lugar de la tierra donde se dé sepultura a sus hijos, señalar quienes deben y quienes no pueden ser admitidos en el recinto que haya señalado, indicar los ritos y ceremonias del acompañamiento y de la tumulación de sus difuntos."

Por tales razones, siendo sociedad perfecta como era, la Iglesia tenía derecho a adquirir terrenos destinados a las sepulturas de sus fieles, derecho este que ahora

la nueva ley la negaba, estableciendo incluso la posibilidad de incautación de los cementerios que tuviera.

Esto era para el obispo "intrusismo y abuso de fuerza", lo primero porque la sepultura era algo que afectaba a las creencias, y el Estado no podía interponerse entre la conciencia de un creyente y su Dios; lo segundo porque de la se nacia el derecho a la eleccion de sepultura en el recinto que la iglesia acotara para ello, lo cual violaba la ley civil obligandole al entierro en cementerios municipales.

La ley, además, atentaba contra los derechos de propiedad de la Iglesia al negarle la facultad de poseer cementerios propios y también contra su jurisdicción al "desespiritualizar" unos recintos que, aun no considerándose propiedad de la Iglesia, habían sido constituidos en lugares sagrados por la bendición general, donde no se enterraban los difuntos de otras confesiones.

La nueva legislación -continuaba el prelado, con la argumentación religiosa ya expuesta por otros hermanos suyos en el episcopado y que, según la jerarquía de la época, venía a ser la razón última de la existencia de los cementerios católicos-, era contraria a dos dogmas; argumento este que, obviamente, solo podía ir dirigido a hacer ver a los creyentes lo opuesta a sus principios de fe que era la legislación republicana.

"Se atraviesa, además, el dogma de la comunión de los santos, en virtud del cual los justos se comunican las buenas obras mutuamente: los vivos, según la iglesia, podemos ayudar a los muertos, que forman con nosotros un solo cuerpo místico, ya que todos pertenecemos a la santa Iglesia. El dogma de la resurrección de la carne es también fundamental en el Credo de nuestra Iglesia católica; y mientras viene el gran día de la resurrección y del juicio universal, los que vivimos y los muertos estamos atados por la

misma creencia, vivimos la misma vida de espíritu y tenemos todos el mismo derecho a cobijarnos en el regazo de una misma Madre, que es la Iglesia. Por todas estas razones, la muerte, el cadáver, y la sepultura son cosas íntimamente relacionadas con nuestro fin último y su regulación a nadie corresponde más que a la Iglesia."

Al Estado, ciertamente, correspondían determinadas competencias sobre los cementerios que el prelado no negaba, ya que la Iglesia nunca obstruiría su acción "cuando se mantenga en sus límites", antes sería su auxiliar "como el Estado, sobre todo cuando la nación es católica en su inmensa mayoría, debiera secundar la gestión maternal y espiritual de la Iglesia para con sus difuntos."

Hecha esta puntualización un último extremo quería clarificar el Dr. GOMA en el intento de defenderse de la principal acusación contra la Iglesia que, en definitiva, era la causa misma de la existencia de la nueva ley: no era dura cuando prohibía la inhumación en sagrado. No era dura, y, si no lo hacía, podía ello constituir un mal ejemplo, para los fieles; no era dura y, al fin y al cabo, los que la acusaban debían de recordar la separación que establecería el mismo Cristo entre buenos y malos el día del juicio final.

"Publicamente en pleno Parlamento, se ha arguido contra el espíritu de caridad de la Iglesia por rechazar de sus cementerios a los indignos de sepultura eclesiástica. Lo que ha hecho siempre la Iglesia ha sido extremar la caridad en este punto; y solo cuando sus hijos desviados han roto con ella ha impuesto la sanción correlativa al delito. Sanción que es apelación urgente a la caridad de los mismos fieles, que podrían ser seducidos por los "separatistas", que no temieron en vida excomulgarse a sí mismos del gremio de la Madre. Los no bautizados, como no forman parte de la Iglesia, no deben ser sepultados en su recinto. La Iglesia es "comunidad", de pensamiento y de vida, entre los que a ella pertenecen y esta comunión puede quedar oficialmente rota, para

bien de la comunidad, por tal corrupcion de pensamiento o de vida de algun hijo desgraciado de la Iglesia, que esta se ve obligada a no admitirlo entre sus buenos hijos. Del Evangelio y escritos apostolicos podriamos aducir procedimientos analogos en la comunión de los vivos. Ni niega la Iglesia toda sepultura sino solo en tierra sagrada. Y si tanto se urgen las exigencias de la ley de la caridad cristiana ¿por que no se recuerdan las tremendas palabras del mismo Cristo: *Ate, maledicti...* cuando en el dia ultimo del mundo ¿se constituya definitivamente la comunión eterna de la sociedad de los bienaventurados, con exclusion absoluta de los precitos?"

Por ultimo, el obispo de Zamora, Dr. Manuel ARCE OCHOAURENA, un ano mas tarde, al publicar en su boletin diocesano, el 15 de mayo de 1933, el reglamento para la aplicacion de la ley de cementerios, volvía a insistir -y era el unico que, en los boletines investigados, hacia esta reiteracion con motivo de la publicacion de la citada norma- en la defensa de la existencia de los cementerios catolicos, a causa de las reglas para su posible expropiación que establecia.

Afirmaba el prelado que el reglamento venia a ser mas duro que la ley, estableciendo la posibilidad de privar a la Iglesia de la propiedad de los cementerios parroquiales sin causa suficiente que fundamentara tal medida.

Al establecer las anunciadas bases para la expropiación, la nueva norma encerraba, en efecto, suma vaguedad, determinando que esta podia realizarse no solo cuando el municipio careciera de cementerio propio -con lo que se diluía la necesidad de construcción señalada en los articulos precedentes- sino tambien cuando la incautación fuera "necesaria o muy conveniente", causas que

(40) 30 de marzo de 1932, "El laicismo póstumo.- Instrucción pastoral sobre cementerios y sepulturas", BOE de Tarazona y Rodela, año 70, 31 de marzo de 1932, num. 704, págs. 207-239.

como se ve, introducían un concepto jurídico indeterminado que daba un gran margen de actuación a los ayuntamientos. Pero no hay que olvidar que, siendo el reglamento una norma de desarrollo de las prescripciones establecidas en la ley, bastaba con que las causas de expropiación vinieran justamente determinadas en ella para que no pudiera hacerse objeción alguna a la nueva disposición. Ahora bien, preciso es recordar que las disposiciones de la ley en este punto eran de igual vaguedad que las del reglamento, al haberse limitado a indicar que la expropiación se realizaría "en los casos en que así proceda". A ambas disposiciones, pues, podía aplicarse indistintamente la queja del Dr. ARCE OCHOTORENA, pero justo es señalar que esta tenía fundada razón en cuanto que, dada la imprecisión de la ley y la libertad que esta daba, por consiguiente, al poder ejecutivo, este hubiera debido determinar con mayor precisión las causas en que los municipios podían o debían apoyarse para efectuar la expropiación de los cementerios parroquiales. Podía decirse, pues, que al no desarrollar este extremo, el reglamento endurecía las prescripciones de la ley confirmando el deseo de la imprecisión. (41)

...no por sospechado y temido el Reglamento que ahora se dicta para la ejecución de la ley, ha dejado de renovar quizá con más intensidad que la ley misma las heridas por esta abiertas en la conciencia católica. Sin tener para nada en cuenta los derechos imprescriptibles de la Iglesia se han articulado en el transcrito Reglamento disposiciones gubernativas que al mismo tiempo vulneran la libertad de los católicos y los principios fundamentales de la justicia. Es en efecto, un principio de rigurosa justicia que, quien está en legítima posesión de una cosa, no sea de ella despojado sin una razón muy poderosa de necesidad o utilidad pública. No obstante la evidencia y universalidad de este principio, se reglamenta en la disposición gubernativa arriba transcrita la expropiación

(41) Ver la nota 3 y el apéndice núm. 2.

forzosa de los cementerios parroquiales sin hacer alusión siquiera a ninguna de las causas que pudieran cobonestar tan extrema y radical medida."

Ley y reglamento eran, por tanto, igualmente injustos, y ante la injusticia cabia la "legítima defensa", concepto que, en este caso, significaba para el obispo la pacífica actitud de no dejar de protestar ante el nuevo abuso contra la Iglesia.

"La ley, por consiguiente, esta en abierta pugna con los postulados de la justicia, y cuando esto ocurre, y la contradicción resulta, como en el presente caso, notoria y manifiesta, reaparece imperiosamente el derecho de legítima defensa, mas alto y elevado que las leyes humanas, exigiendo, por lo menos, que no se preste a la arbitrariedad legal benevolencia aquiescencia, porque ello equivaldria a desviar el juicio, del camino de la verdad, y, la conciencia, del cumplimiento del deber. Esta es la razon por la cual no podemos dispensarnos, sin faltar al Nuestro, de consignar en el BOLETIN ECLESIASTICO Nuestra respetuosa y enérgica protesta contra la ley y el reglamento que la aplica, firmemente persuadidos de que solamente el prejuicio anticatólico y no una razon de utilidad pública ha podido inspirar ambos."

No señalándose razones convincentes de utilidad pública que fundamentasen la posible expropiación, preciso era concluir que solo el afán secularizador de la República fundamentaba las medidas contra los cementerios católicos, como lo probaba el hecho de disponerse el derribo de las tapias de separación entre estos y los cementerios civiles.

"¿Qué razon puede excogitarse para imponer coactivamente la unidad de cementerio con la expropiación forzosa de los que son católicos? ¿Qué título de utilidad pública puede invocarse para que sean sepultados dentro del mismo recinto murado los restos funerarios de creyentes e incrédulos, de católicos y ateos, de los

cristianos que han muerto en el seno de la Iglesia y de los que de ella voluntariamente se apartaron en vida?"

Con lo que desde nuestro punto de vista puede parecer cierta ironía aunque probablemente no lo fuese, apuntaba el prelado posibles causas de estas medidas para pasar a refutarlas, sin percatarse de que la tercera de ellas, la única de las por él esgrimidas en que el legislador se apoyaba, no podía en modo alguno ser anulada bajo el exclusivo punto de vista del pensamiento católico, único fundamento que el obispo podía encontrar en este caso para su razonamiento y que, desde luego, no podía ser admisible por el pensador laico. Así expuesta su argumentación bajo el exclusivo prisma de la fe, forzosamente concluía el Dr. ARCE que la única causa fundamentadora de las nuevas normas era el aían secularizador del nuevo régimen, conclusión con la que, por otra parte y pese a lo limitado de su exposición, hay que estar forzosamente de acuerdo.

"¿Será acaso la unidad del Estado, o la moral pública o la igualdad de todos los ciudadanos ante la muerte? La unidad del Estado si se rompe, si sufre quebranto por el hecho de que los católicos posean sus templos propios y en ellos celebren sus cultos con independencia de los que no lo son; ¿por qué se ha de romper por el hecho de que tengan también cementerios separados, propios e independientes, siendo estos nada más que la expansión de los templos? La moral pública, límite fijado por las leyes al ejercicio de la libertad de conciencia que tampoco sufre quebranto según el espíritu que a las mismas leyes civiles informa, por la profesión de distintas creencias durante la vida ¿por qué ha de quebrantarse si esta profesión es perpetua y llega hasta la tumba? La igualdad de todos ante la muerte que suele invocarse, lejos de favorecer la medida legal de la unidad e igualdad de cementerio, la contradice en forma manifiesta: porque la muerte ni da patente de honorabilidad al que no la tuvo antes de morir, ni puede privar de ella al que la poseyó durante la vida; y lo

que es mas, la muerte fija de una manera irrevocable el merito o demerito de los hombres ante Dios y su conciencia y es por lo mismo la linea divisoria que no podra borrar ley humana cualquiera que esta sea. A donde el arbol cayere alli permanecera para siempre. Solamente queda en pie como fundamento explicativo de la ley y su reglamento, el espiritu secularizador, que pretende borrar de los cementerios catolicos su caracter propio, esto es, el de lugares bendecidos por la Iglesia Catolica, en donde los restos de los cristianos piadosamente depositados segun los ritos y prescripciones liturgicas, esperan a la sombra de la Cruz, que dirigio sus pasos en esta vida y recibio el ultimo suspiro en laagonia, los sufragios de sus deudos y sus amigos que viven, y la suprema visita en el dia de la resurrección, del Juez de vivos y muertos."

Y en base a estas eclesiásticas conclusiones pasaba el prelado a argumentar su defensa de la existencia del cementerio catolico y de la necesidad de la separacion de este de aquellos recintos destinados a los que en vida se habian separado de la Iglesia:

"A la luz de estas verdades, se explica y nace el respeto y veneracion que la Iglesia tiene a los difuntos"" que murieron en su seno y les prepara despues de la muerte digna sepultura, separada"" de los que libremente apostataron de ella durante su vida. Este es el significado del aforismo tantas veces repetido en las fuentes canónicas. "Quibus non communicavimus vivis, non communicamus defunctis".

...
"porque el cristiano cree en la resurrección de los muertos que fueron depositados en sus cementerios; porque los cuerpos de los cristianos fueron templo del Espiritu Santo por la gracia sobrenatural que se derramo en las almas con quienes estuvieron unidos, se han considerado y son los cementerios catolicos lugares sagrados; y las funciones liturgicas que integran el funeral desde el levantamiento del cadaver hasta la inhumación, como actos religiosos organizados, dirigidos"" y regulados por la única autoridad competente en lo sagrado y en lo litúrgico, es decir la autoridad

de la Iglesia católica, sociedad perfecta y soberana que, si reconoce en sus cementerios la intervención del Estado en la parte que a la higiene afecta, no es por la fuerza imperativa de la ley civil, sino por las exigencias de la ley natural, cuyos preceptos obligan, por ser divinos, a la Autoridad eclesiástica y a la Autoridad civil.***

(43) 15 de mayo de 1933, "Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de enero de 1932", BOE de Zamora, año 70, 16 de mayo de 1933, núm. 7, págs. 109-124.

2.2.2. Otros documentos eclesiásticos: archidiócesis de Toledo y diócesis de Barcelona.

Junto a los escritos específicos del episcopado, queremos referirnos ahora a los comentarios a las normas legales y a las instrucciones dadas a los parracos acerca de su actuación ante los posibles actos de los ayuntamientos que, redactadas por los responsables directos de los boletines oficiales eclesiásticos o dictadas por las vicarías generales de las distintas diócesis en indudable cumplimiento de mandatos de sus obispos, insistían, en algunos casos, en la defensa del derecho de la iglesia a tener cementerios propios.

Así, por ejemplo, el boletín oficial de Toledo publicaba, tras la inserción del texto de la ley, unas "Observaciones" en las que defendía la existencia del cementerio católico en base a la libertad de elección de los fieles que, en todo caso, debía respetarse; argumento que, si recuerda al esgrimido por el obispo de Calahorra, tenía un importante matiz diferenciador de aquel, por cuanto tal obispo se refería a dicha libertad de elección con tintes negativos, ya que, para él, era consecuencia del libre rechazo de la iglesia hecho durante su vida por los bautizados, mientras que el redactor del boletín eclesiástico de Toledo la enfocaba en forma positiva: debía respetarse la libertad de los creyentes de elegir el sitio y la forma en que deseaban ser enterrados, sitio y forma que incluía cuestión esta importante para los creyentes, por indiferente que hoy pueda parecer- el deseo de que sus restos no estuvieran junto a los de cadáveres de infieles o, lo que era peor, de "judíos, masones o ateos". Como vemos este argumento no incluía la última palabra decisoria de

la Iglesia en cuanto al derecho de sus hijos a ser enterrados en un lugar u otro, que era, en definitiva, el privilegio contra el que la ley pretendía actuar. Por otra parte destaca en este comentario el calificativo de "antidemocrática" con que era frontalmente definida la ley en base a que sus estipulaciones no respondían a una necesidad reclamada por la opinión de la mayoría. Así, tras la inserción de la norma, comentaba el boletín:

"No es necesario -tan evidente es- demostrar que la ley que queda transcrita conculca los derechos de la Iglesia, que, por su propia índole, puede legislar sobre la sepultura de sus miembros y tiene derecho a poseer cementerios propios donde descansen unidos a la sombra de la Cruz aquellos que vivieron unidos por una misma fe.

"Es ilógico, además, reconocer a cada ciudadano el derecho de profesar libremente la religión que quiera y privarle del derecho de ser enterrado en el lugar que, por obediencia a esa Religión, haya elegido.

"Es además, contrario a la libertad que tanto se preconiza el privar a los católicos del derecho que, en uso de su libertad, tienen de elegir lugar para su sepultura. No se puede permitir, dicen, que en nombre de la Religión se establezcan separaciones después de la muerte. Pero ¿Es que no hay también separaciones y diferencias en la vida? ¿Es que se comete una injusticia separando de la comunidad de los fieles en el cementerio a los que voluntariamente se separaron en la vida? En nombre de la igualdad se quiere borrar toda diferencia después de la muerte, pero esta igualdad ficticia no puede establecerse sin detrimento de la libertad, la cual no existe desde el momento que a cada uno se le señala el lugar que sus cenizas han de ocupar en el cementerio. No es, ciertamente, libertad el que un católico no pueda evitar el que sus restos mortales descansen, por ejemplo, al lado de los de un mason o un judío o un ateo. En vano se invoca la fraternidad; podrá la Ley hacer que descansen juntos los cuerpos, pero no podrá borrar la diferencia que separa a los espíritus.

"Ese mismo afán de borrar diferencias después de la muerte, sería bastante para juzgar del espíritu de la ley que comentamos. En el fondo, esto es lo que se busca: una nivelación absurda

después de la muerte, que solo pueden concebir los que no crean en otra vida.

«De ahí el ahinco con que los enemigos de la Iglesia han trabajado desde fines del siglo XVIII por que desaparezca toda profesión de fe en los cementerios. Dijérase que les estorba demasiado el recuerdo de una vida venidera.

«Es además la ley sobre los cementerios una ley antidemocrática, ya que no corresponde a un estado de opinión, puesto que muy pocos la reclamaban.***»

No cabe duda que la "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos" publicada por el boletín oficial eclesiástico de Barcelona el 16 de marzo de 1932 se inspiró, en la parte que tratamos, en los comentarios del boletín de Toledo que acabamos de transcribir, si bien recortando algunas de sus expresiones, como la relativa al calificativo de antidemocrática que se incluía en aquel y añadiendo en la argumentación de la libertad de elección sobre la forma en que querían ser enterrados los fieles, el matiz negativo de la elección en vida expuesto por el obispo de Calahorra.***»

(44) s.f. "Ley sobre cementerios.- Observaciones". BDE de Toledo, año 88, 16 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 61-65. El boletín eclesiástico de Avila publicó este mismo texto bajo el título "Cuestiones Pastorales ante las nuevas leyes civiles", indicando que lo recogía del de Toledo, (BDE de Avila, año 43, 11 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 156-161).

(45) * "Concepto de esta Ley Civil.- Es evidente que esta ley conculca los derechos de la Iglesia, que por su propia índole puede legislar sobre la sepultura de sus miembros y tiene derecho de poseer cementerios propios, donde descansen unidos a la sombra de la Cruz aquellos que vivieron unidos por una misma fe.

Es ilógico, además, reconocer a cada ciudadano el derecho de profesar libremente la religión cristiana y privarle del derecho de ser enterrado en el lugar que, por obediencia a esa Religión haya elegido. Y es también contrario a la libertad que tanto se preconiza el privar a los católicos del derecho que en uso de su libertad, tienen de elegir lugar para su sepultura. ¿No es una violencia el que un católico no pueda evitar que sus restos mortales descansen

3. La reacción contra los actos de las autoridades civiles.

La practica secularizadora de la Republica iba a tener en este primer bienio sus expresiones mas radicales en la actuacion de muchas de las autoridades locales que, interpretando en numerosos casos la legislacion mas alla de lo que la misma contenia, extremaron los principios que la informaban e incluso, en algunos casos, comenzaron a adoptar en sus actuaciones actitudes anticonfesionales mucho antes de que cualquier norma, incluso la Constitución, fuese promulgada, con lo que, infringiendo el ordenamiento juridico vigente, al no existir en la fecha de sus actuaciones derogacion expresa o tacita de la normativa anterior, violaron manifiestamente los derechos reconocidos

al lado de un mason, de un judio, o de un ateo! No vale decir que, en nombre de la Religión, no se pueden establecer separaciones despues de la muerte, puesto que es cosa natural que asi como hay separaciones y diferencias en la vida, las haya despues de ella, y es lógico que permanezcan separados en los Cementerios de la comunidad de fieles aquellos que voluntariamente se separaron de ella en vida. Ese afán de borrar diferencias despues de la muerte, seria bastante para juzgar del espíritu de la Ley que comentamos; esta nivelación absurda despues de la muerte sólo puede concebirla quien no cree en la otra vida,

«Pero aun el mismo contenido de la ley, a pesar de ser injusto y francamente sectario, dista mucho de tener el alcance que han pretendido darle algunos Ayuntamientos.»

8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm.5, págs. 108-120, Reproducido por el de Mallorca, año 72, 31 de marzo de 1932, núm. 8, págs. 172-184.

a la Iglesia, dando lugar a una larga serie de problemas. Ejemplos numerosos de tal proceder se dieron, precisamente, en el ámbito de las disposiciones sobre cementerios, en el que, no obstante, cabe encontrar las actitudes mas variadas y los hechos mas variopintos como iremos viendo,*** no sin apuntar ya aqui, como ejemplo revelador de la actitud española ante esta cuestion, que en las dos fechas cumbre de la Republica en cuestion de cementerios, es decir, el dos de noviembre, festividad religiosa de los fieles difuntos, y ya plenamente vigente la ley secularizadora, aparece la noticia, en 1932, de la gran afluencia de publico a los cementerios de Madrid, lo cual, si era plenamente normal para los católicos no deja de ser paradójico en el ámbito de los civiles, respecto a los que también se eligió esa fecha para llevar a sus tumbas las tradicionales flores,***

(46) En esta esfera tuvo lugar, en efecto, la adopción de las posturas más divergentes y los actos más paradójicos y, así, podemos reseñar que ya el 6 de mayo de 1931 la nueva junta municipal del cementerio de Cartagena acordó la secularización del mismo, cesando al capellán mientras en el Ayuntamiento se aprobaba la moción de los socialistas suprimiendo todas las subvenciones de carácter religioso ("El Debate", 7 de mayo de 1931) y, según ponía de manifiesto el boletín eclesiástico de la diócesis de Málaga, desde el mismo mes de mayo se enterraban y exhumaban restos en el cementerio católico de la ciudad sin intervención alguna de la autoridad eclesiástica, por lo que el vicario general había hecho la pertinente reclamación al alcalde sin resultado alguno, y ya en el mes de septiembre existía el propósito municipal de poner en comunicación los cementerios confesional y civil, por lo que el provisor eclesiástico había solicitado del ayuntamiento que se impidiera este hecho y se admitiera la intervención eclesiástica en la sepultura y exhumación de los cadáveres "conforme a las leyes vigentes" (BOE de Málaga, año 64, 15 de septiembre de 1931, núm.10, pag. 387). En el extremo opuesto se situaban los alcaldes de otras localidades, de forma que al medio año de promulgada la ley secularizadora de cementerios, no habían procedido aun a su secularización, dando lugar a la intervención de más altas esferas del poder ejecutivo, tal como sucedió -que tengamos noticia- en algún pueblo de Ciudad Real, concretamente en Castellar de Santiago, donde, ante la demora de la alcaldía, fue preciso que en noviembre de 1932 interviniera el delegado del gobernador ordenando el derribo de la tapia que separaba el cementerio civil del católico ("El Sol", 20 de noviembre de 1932) o en las provincias vascongadas, donde el gobernador general tuvo que suscribir una circular el nueve de junio de 1932 recordando a los alcaldes las obligaciones que la nueva ley imponía a los municipios ("El Sol", 10 de junio de 1932).

(47) "El Sol", 2 de noviembre de 1932.

y ya en 1933, la de que el ministro de Estado, SANCHEZ ALBORNOZ, rezara, acompañado de un sacerdote, ante la tumba de su esposa en Ávila mientras que en la ciudad cerraba el comercio con motivo de la festividad religiosa y también había, como en toda España, la consabida concurrencia a los cementerios. "49)

3.1. La demolición de las tapias de separación de los cementerios religiosos y civiles. Los pronunciamientos de los obispos y arzobispos de Orense, Barcelona, Tuy, Astorga, Salamanca, Ávila, Tarazona (administración apostólica de Tudela), León, Sevilla, Zaragoza, Vitoria, Santiago de Compostela y Burgos y de las conferencias de metropolitanos.

Ya el 4 de noviembre de 1931 los párrocos de Orense denunciaron a su obispo, el Dr. Florencio CERVINO GONZALEZ, la demolición de las tapias de separación de los recintos católico y civil del cementerio municipal mediante un escrito en que destacaban la falta de normativa legal que amparara tal hecho. Escrito que el prelado haría suyo trasladándolo al alcalde, al que pedía que fuera rehecho el muro derribado:

"Los infrascritos Curas párrocos de esta ciudad tienen el profundo disgusto de poner en conocimiento de V.E. que ha sido derribado, al parecer por orden de la Excm. Corporación Municipal, el muro que separaba el cementerio católico del civil.- Este hecho, lamentable por lo que es en sí y por lo que significa, implica un profundo desprecio de los derechos de la Iglesia de Cristo y desconocimiento de la

legislación eclesiástica; pero a la vez desconocimiento o desprecio de la legislación civil vigente sobre esta materia.- La futura Constitución española, aunque en ella se llegue tal vez al desaturo de la secularización de cementerios, no ha sido aun promulgada, ni tiene, por lo tanto, fuerza legal alguna.- La legislación civil hoy vigente está condensada en la Ley de 24 de abril de 1885, RR.OO. de 16 de julio de 1871, 28 de febrero de 1872, 2 de abril de 1883, 17 de febrero de 1886, 16 de julio de 1888 y otras mas, en todas las cuales se dispone que los terrenos destinados a uno y otro cementerio, católico y civil, deben estar rodeados por un muro que los separe.- El hecho que venimos lamentando lastima por igual los sentimientos y la memoria de católicos y disidentes. De los primeros, porque con su fe han dado testimonio de que querian que sus restos mortales fuesen sepultados en tierra sagrada, bendecida por la Iglesia para ese objeto; y de los segundos, o sea de los disidentes, porque tambien estos han elegido en vida el cementerio civil, y, en cuanto les ha sido posible, manifestaron su deseo de que sus cenizas no descansasen a la sombra de la Cruz de Cristo, porque no creian en ella.- En atencion a lo expuesto, los Párrocos que suscriben protestan ante V.E. de la arbitraria disposición ya mencionada del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Capital, lamentando que con ella no de a los ciudadanos mayor ejemplo de respeto a las leyes eclesiásticas y civiles."

A estas frases que, si correctas en el planteamiento de la vigencia de las normas, no dejaban de ser muy discutibles en el meollo ultimo de la razon de la existencia de la separación hasta esos tiempos existente, al afirmar tan rotundamente que los no católicos solian "-en cuanto les ha sido posible"- expresar su deseo de no ser enterrados en sagrado, añadiría el obispo para el alcalde su personal protesta por los hechos denunciados:

"Hasta ahora no he recibido dato alguno que rectifique lo que me comunican los señores Párrocos de Orense, por cuya razon, lamentando amargamente verme en el caso, no puedo menos de trasladar a V.S. y por su digna mediación a la

Excm.a. Corporación Municipal, la protesta que antecede, que hago mia y con los mayores respetos y consideraciones formulo..."

Ante la vaguedad de la contestación dada por la autoridad municipal, EL Dr. CERVINO escribía una nueva carta el día 30 del mismo mes, carta en la que llegando a admitir, si bien con una sutil critica, la postura no católica de la corporación, pedía nuevas aclaraciones a fin de conocer la actitud que el obispado debía adoptar en el futuro ante tales decisiones:

"Señor Alcalde:

No me enoja, aunque ciertamente me apene por tratarse de un concejo que estimaba católico, el acuerdo por este tomado, y al parecer cumplido, de derribar, suprimir el muro de separación entre los cementerios católicos y civil, ambas propiedad del Municipio, según hasta ahora existiera y religiosamente conservar los precedentes concejos a tenor de todas las leyes vigentes sobre la materia, civiles y eclesiásticas. ¿Por qué enojarme? Harto se me alcanza que los hombres, lo mismo individual que socialmente, somos mudables... No me extraña, pues, que el actual concejo disienta de los que le han precedido, y aun de todos los fieles católicos orensanos, y resista y se aparte en materia de cementerios, de la doctrina y leyes de la Iglesia. Pero este, cabalmente, es el punto que no aparece claro en la delicadísima, muy agradecida contestación a la respetuosa protesta y coniado ruego que con ocasión de aquel acuerdo y derriba de tal muro habíamos elevado a la Excm.a. Corporación, por nosotros y por nuestros fieles, los Parrocos y Obispo. No dudábamos, no debíamos dudar, como que ni objeto podría ser de nuestro juicio, de las buenas intenciones de los señores ediles en decretar semejante medida, -era lo que correspondía a sus convicciones distintas y aun contrarias a las de la Santa Iglesia-; nos hemos fijado tan solo en el carácter, trascendencia, eficacia y realización del acuerdo que rompía naturalmente nuestras tradiciones, lastimaba nuestras creencias, y pedíamos con religiosa ansia, la modificación del mismo, siquiera fuese mientras fuerza mayor no lo impusiera; y acerca de este particular, unico que nos toca e interesa, nada se nos responde

concretamente. ¿Sera que se accede a lo pedido para continuar, como así se declara, en las buenas relaciones de paz y armonía entre ambas autoridades, civil y eclesiástica? ¿Sera que se desatiende tan en absoluto lo deseado que ni aun de contestacion se estima digno?

«Fuerza nos será respetar cualquiera de estas soluciones, pero también imprescindible nos será conocerlas para en su vista saber a que atenernos y orientarnos y obrar en cumplimiento de los principios de la Fe y Sagrados Cánones de la Iglesia respecto a los que siendo a ellos contrarios, se les supone o debe suponerseles que quieren pensar, vivir y morir, igual que los del cementerio neutro, o sea, sin cruz ni sepultura eclesiástica.

«Confío, Sr. Alcalde, bien que lamente la molestia, que nos hará la aclaración.»⁴⁹

Hay que destacar que, siguiendo esta actuación pionera, inmediatamente de ser promulgada la Constitución y con la sola base de lo dispuesto en su artículo 27, se procedió por varios ayuntamientos al derribo de los muros de separación de los cementerios religioso y civil. Tal harían, entre otros, los de Sevilla -que al no poder derribar enteramente la tapia por la existencia de nichos adoptó la solución de abrir un portillo en ella-, El Ferrol, Mazarrón y Cáceres. Derribos que fueron efectuados con toda solemnidad asistiendo a ellos las respectivas corporaciones municipales.⁵⁰

Con independencia de los ayuntamientos citados preciso es referirse especialmente, por su particular problemática, a la actuación del de Barcelona. El acuerdo del derribo de las tapias de separación fue tomado en una

(49) 6 y 30 de noviembre de 1931, "Contra un acuerdo municipal referente al derribo del muro que separaba el Cementerio católico del civil", BGE de Orense, año 98, 17 de diciembre de 1931, núm. 22, págs. 353-356.

(50) "El Sol", 15 y 16 de diciembre de 1931 y 3 de enero de 1932.

tumultuosa sesión municipal, celebrada, al igual que había sucedido en el caso de Orense, antes de ser publicada la Constitución.⁽⁵⁰⁾ razón por la que algunos concejales, arguyeron la inexistencia de legislación en que pudiera basarse; no obstante, ya el 4 de diciembre ratificaba el alcalde, Sr. AYGUADÉ, la realización del derribo, al que se procedió dos días más tarde en uno de los cementerios barceloneses en un acto al que asistirían unas cinco mil personas y en el que se pronunciaron sendos discursos, señalando el teniente de alcalde encargado de la comisión de cementerios que el acuerdo municipal no se había inspirado en el deseo de herir ningún sentimiento, sino en el de respetar a todos los hombres, cualesquiera que fuesen sus ideas:

"Lo que nosotros queremos es que no se nos imponga ninguna traba a la conciencia; que los santuarios no se conviertan en barricadas, ni que el clero se convierta en un ejército, ni que la religión pase a ser una cadena que esclavice la conciencia de los hombres."

El alcalde, por su parte, había subrayado que el acuerdo respondía a los deseos del pueblo catalán y que "ninguna ley divina mandaba esta separación de los hombres después de haber rendido su tributo a la vida".⁽⁵¹⁾

Frente a tal filosofía el obispo de Barcelona, Dr. Manuel IRURITA ALMANDOZ, había expuesto en su protesta contra el acuerdo municipal y el acto secularizador que se pretendía realizar, las creencias de la fe católica. Dicha protesta, escrita el 30 de noviembre de 1931, tras el conocimiento del acuerdo, y publicada por la prensa barcelonesa, era de una dureza mucho mayor que la formulada anteriormente por el obispo de Orense.

(50) "El Debate", 28 de noviembre de 1931.

(51) "El Sol", días 5 y 8 de diciembre de 1931.

Se quejaba el prelado en primer lugar e implícitamente de haber tenido noticia del hecho a través de la prensa, de la ilegalidad del mismo al no venir amparado por ninguna norma vigente y de la solemnidad que la corporación pretendía dar al acto:

"Por la Prensa hemos tenido noticia de una proposición, presentada y aprobada por mayoría de votos en la sesión del viernes del Ayuntamiento de esta ciudad, que dice así: 1º Que se proceda al derribo de las paredes de cierre que separan el recinto católico del libre, en todos los cementerios de Barcelona. 2º Que el Ayuntamiento de Barcelona asista en Corporación a la ceremonia de la destrucción de la valla existente entre el Cementerio Católico y el libre en el Cementerio del Sud-Oeste, el domingo día 6 de diciembre, por la mañana, para solemnizar el mencionado acto, al que asistirán representaciones de muchas entidades barcelonesas, deseosas de concurrir a la ceremonia, destinada a reafirmar los postulados de la libertad de conciencia.

«Esta proposición, así expresada, no solo es contraria a las leyes vigentes y a los sagrados cánones, sino que tiene, además, una significación de impiedad tan insolente y monstruosa que seguramente no ha sido bien meditada por los señores Concejales, que la presentaron y favorecieron con su voto.

«Grave es la ofensa, que el Ayuntamiento iniere a la Iglesia de Cristo con lo propuesto en primer término, derribando las paredes, que separan los Cementerios Católicos de los libres.

«Más grave todavía por lo que se propone después, por la solemnidad, que se quiere dar al acto destructor, del domingo día 6."

Pero la gravedad del acto radicaba para el prelado, sobre todo, en la base con que la corporación pretendía fundamentar el acto, base que, en puridad, no hacía más que responder a uno de los más caros postulados que inspiraban la legislación secularizadora de la República y que había sido proclamada solemnemente desde su mismo advenimiento: la libertad de conciencia. El Dr. IRURITA aprovechaba el

contexto del acuerdo municipal para argumentar sobre las consecuencias nefandas de la defensa de tal principio por cualquier ser humano, consecuencias que se agravaban en esta ocasión al pretender proclamarlo mediante un acto público y solemne, aunque, tal como hemos visto ya apuntado por otros miembros del episcopado, no dejara de admitir, sin explicitar en que casos era ello válido, que la libertad de conciencia podía ser tolerada en "determinadas circunstancias", pese a ser sus postulados radicalmente "falsos", "impíos" y "reprobables":

"Pero es muchísimo más grave por la finalidad de la ceremonia, destinada, se dice, para reafirmar los postulados de la libertad de conciencia. Y decimos que esto entraña una gravedad mayor, porque los postulados de la libertad de conciencia, que se proyecta reafirmar, se reducen, en suma, a proclamar la independencia de la conciencia humana respecto de Dios y de la Autoridad religiosa por Dios constituida. Y esto es completamente falso y sumamente impío; porque si el hombre fuese independiente, autónomo, si tuviese un derecho contrapuesto a los derechos de Dios, los derechos de Dios serían limitados, pues tendrían por límite ese derecho presunto del hombre; y, como en Dios los derechos se identifican con su esencia, se seguiría de ahí que Dios es limitado, que no es infinito, es decir, Dios dejaría de ser Dios. Podrá tolerarse en determinadas circunstancias la libertad de conciencia; pero los postulados de esa libertad en sí mismos considerados son y serán siempre falsos, impíos, reprobables. Y reafirmar esos postulados con un acto público, solemne, como se pretende el domingo próximo, es sumamente injurioso a Dios Nuestro Señor, es de una impiedad insolente y monstruosa, sobre todo si se atiende a las circunstancias, que van a concurrir."

Estas circunstancias eran, en efecto, tanto más graves por cuanto la corporación, probablemente para favorecer la concurrencia al acto que pretendía, había elegido el domingo para realizarlo, día que, lógicamente, era para el obispo el más inadecuado al ser la festividad

religiosa semanal de los católicos y en el precisamente, como apuntaba, los asistentes iban a hollar impiamente los huesos de sus, sin duda, religiosos antepasados sin percatarse -apocalíptico aviso poco neotestamentario- de que la ira divina, si así le placía, podía allí mismo fulminarlos.

"Porque ¿qué día se ha escogido para ultrajar a Dios, en una forma pública y oficial? El domingo, día del Señor por antonomasia, el día de la semana, que Dios mismo se ha reservado para que los individuos y los pueblos le rindan el tributo público y social de su adoración. Y ¿qué escenario? *El Cementerio...*" El Cementerio, donde se cumple la sentencia lanzada por Dios contra el pecador: "Polvo eres y en polvo te convertirás". El Cementerio, donde Dios nos muestra su Justicia Omnipotente, sepultando allí, una tras otra, las generaciones de una raza prevaricadora. Y ¿donde vais a apoyar vuestros pies? Sobre los huesos de vuestros padres, muchos de los cuales murieron besando el santo Crucifijo y bajaron a esas tumbas amortajados con hábito religioso.

"Dejad en paz a los muertos... No turbeis impiamente el silencio sagrado de los sepulcros... Ese silencio solo debía turbarse por el rumor de las plegarias, hasta tanto que llegue la hora tremenda, en que suene la trompeta del Ángel: "muertos, levantaos, venid a juicio". No vayais a erguir vuestra soberbia frente contra Dios cabalmente al lugar mismo, donde todas las frentes, aun de los incrédulos y apóstatas, están hundidas en el polvo, acatando de grado o por fuerza la Soberanía del Rey de Reyes y Señor de los que dominan. No vayais al Cementerio a provocar insolentemente la ira de ese Dios, que allí mismo os puede dejar subitamente sin vida, aplastados con mas facilidad que un camión aplasta el vil gusano, que cruza la carretera."

Con estas consideraciones era obvia la impiedad insita en el acuerdo de la corporación barcelonesa del que

el prelado, es de suponer que mas por táctica que por convencimiento, expresaba su esperanza de que no se llevara a cabo, sin dejar de manifestar su enérgica protesta contra el y, singularmente, contra la solemnidad con la que, para proclamar el fin del control eclesiástico sobre los entierros de los ciudadanos, queria revestirse su realizacion.

"Tal es el contenido impio, que se encierra en la desdichada proposicion, aun salvando, como salvamos, las intenciones intimas de los simpatizantes con ella. Estamos seguros de que ninguno de ellos lleva tan lejos su impiedad. Y aun abrigamos la esperanza de que no llegara la proposicion a traducirse en acuerdo firme, a poco que reflexionen sobre su extrema gravedad.

"Mientras tanto, levantamos nuestra voz de protesta contra esa proposicion, reprobandola en todas sus partes. Protestamos singularmente contra la solemnidad, que se quiere dar al acto del domingo.

"Y dando las gracias a los señores Concejales, que con tanta valentia defendieron la causa católica en la sesion pasada, pedimos instantemente al Señor por mediacion de la Virgen de la Merced, nuestra Patrona, que de al Ayuntamiento abundante gracia de luz y fortaleza, para administrar los intereses temporales en conformidad con las leyes divinas." "

Una vez publicada en la prensa esta protesta se adhirieron a ella los parrocos de las cuarenta y ocho parroquias de Barcelona por medio de una carta dirigida al alcalde en la que, tras destacar, al igual que habian hecho los parrocos de Urense, que la Constitución aun no habia sido promulgada, hacian referencia a la infracción que iba a cometerse contra la legislación en vigor en la materia, destacando, además, que el decreto de nueve de julio

(54) 30 de noviembre de 1931. "Contra un acuerdo municipal.- Protesta del Excmo. Sr. Obispo", BOE de Barcelona, año 74, 4 de diciembre de 1931, núm. 22, págs. 668-670.

anterior no habia supuesto modificacion alguna en tal legislacion ya que tan solo declaraba la exclusiva competencia de la autoridad municipal en la guarda y conservacion de los cementerios civiles. A ello añadian el discutible argumento de que el acuerdo municipal iba a suponer una vulneracion del derecho de propiedad de aquellos que habian adquirido su sepulcro en la forma en que el cementerio habia estado configurado:

"Pero hay otra razon poderosa de caracter juridico social que se opone al referido acuerdo, y es el derecho intangible de propiedad de los propietarios de los sepulcros asi catolicos como disidentes, que adquirieron legitimamente a base de la separacion de los dos Cementerios en la forma que estaba prescrito en la Ley, derecho sagrado que a todas luces quedara violado si se lleva a ejecucion el predicho acuerdo contra el cual deben protestar unos y otros por ser igual y gravemente lesivo de sus derechos adquiridos y mas caros sentimientos."

Y, tras señalar que no era ese "el mejor camino para obtener la paz y convivencia tan deseada entre los ciudadanos en nuestros dias", pasaban a hacer una defensa de la existencia del cementerio cristiano que, dejando al margen su alusion a la oracion, expresaba unos sentimientos que en nada podian considerarse como exclusivos de estos recintos:

"Son los cementerios cristianos lugares sagrados donde descansan los restos mortales de aquellos a quienes amamos y continuamos amando, unidos algunos de ellos a nosotros por vinculos de sangre, y a donde convergen muchas veces las miradas de nuestro corazón, para depositar con la mayor veneración ante las tumbas un cariñoso recuerdo y una piadosa plegaria. Por esto los sepulcros de nuestros antepasados son las fibras mas delicadas de nuestro corazón; por esto el pueblo católico se interesa tanto por sus cementerios, los cuales por su carácter sagrado estuvieron siempre bajo la jurisdicción eclesiastica aun en los casos recientes de ser propiedad del Municipio."

Así expuesta la razón de la existencia del cementerio confesional pasaban los sacerdotes, siguiendo punto por punto la exposición de su obispo, a quejarse de la proclamada libertad de conciencia en cuyo nombre se había adoptado el acuerdo municipal y a la que obviamente condenaban, así como del hecho de pretender realizarlo en domingo, no sin acabar, aunque con más contundencia que el Dr. IRURITA, formulando la amenaza del posible castigo divino que podía arrogarse la ciudad:

"Y nuestra pena es tanto más profunda y nuestra protesta tanto más enérgica cuanto que la mencionada proposición se aprobó en nombre de una libertad que no existe, y de un postulado de conciencia que no es otra cosa que una afirmación categórica de un falso y absurdo principio que niega villanamente los derechos más sagrados de Dios y los más primordiales deberes del hombre, y por haberse propuesto su eficaz ejecución en un domingo que es cabalmente con preferencia el día del Señor.

"Por todo lo expuesto los infrascritos acuden a V.E. y, a la vez que consignan su más viva protesta, suplican a la Excelentísima Corporación de su presidencia vuelva sobre su acuerdo y evite a todo trance un acto que es antilegal, contra el derecho de propiedad privada, contra la paz ciudadana, contra los sentimientos más caros de los católicos y que, por ser una apostasía social, podría atraer justamente sobre la ciudad de Barcelona el castigo de Dios Nuestro Señor." (66)

Al margen de las protestas elevadas por los obispos en aquellas diócesis en que las autoridades locales habían adoptado acuerdos similares a los expuestos, las manifestaciones masivas de los miembros del episcopado sobre la secularización de cementerios se produjeron a partir de

(55) 2 de diciembre de 1931, "Protesta de los Párrocos de esta ciudad", BOE cit., págs. 670-672.

la promulgación de la ley de 30 de enero de 1932, bien como comentarios a la misma, bien dando normas concretas de actuación a los párrocos ante las posibles y previsibles actuaciones municipales, documentos, estos últimos, que, en algunos casos, contenían también instrucciones de tipo general sobre la actitud que debían mantener ante los hechos que, con base o no en la nueva legislación, pudieran producirse en las distintas clases de cementerios y que no eran más que un recordatorio de la doctrina de la Iglesia que los nuevos tiempos hacía necesario destacar. Ejemplo de este tipo de normas eran las contenidas en la circular del obispo de Ávila, Dr. Enrique PLA Y DENIEL, de 5 de marzo de 1932 o en la pastoral del Dr. Isidro GOMA del día 30 del mismo mes, y nota común a todas, si exceptuamos la postura al parecer mantenida por el obispo de León, es el claro acatamiento de la nueva normativa, respetando -a diferencia de la actitud de los prelados a que acabamos de referirnos, producto de la clara conculcación de la legalidad entonces vigente- el hecho del derribo de las tapias de separación de los recintos católico y civil en los cementerios municipales.

La pastoral que el obispo de Tuy dirigió a sus diocesanos el 24 de febrero de 1932, y a la que ya nos hemos referido, incluía una serie de observaciones a la nueva ley. Entre ellas la relativa a la norma que trataba de la demolición de las tapias de separación, de la que destacaba se refería únicamente a los recintos que no eran propiedad eclesiástica y cuya improcedencia fundamentaba en que la consuetudinaria separación de ambos recintos era derivación normal de una opción de vida acorde o no con los principios de la fe católica, haciendo abstracción, por tanto, de la última potestad decisoria de la Iglesia:

"La quinta observación recae sobre el artículo primero en el que se ordena que las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los confesionales, cuando sean contiguos. Trata este artículo solamente (notese bien) de los cementerios municipales; pero aun tratándose de los cementerios propiedad de la sociedad civil, los cadáveres de los católicos debieran ser enterrados en parte bendecida y reservada, como lo hemos visto en el punto 52 de la segunda parte de esta Instrucción.⁽⁵⁶⁾ Y esta separación no es hija del odio de los católicos contra los no católicos; es una derivación lógica de la profesión de la Fe católica y es también la aplicación de una norma que se observa en otras mil esferas de la vida humana."⁽⁵⁷⁾

Las "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de Cementerios" publicadas por el boletín oficial de la diócesis de Astorga en 1 de marzo de 1932 no dejaban de ser extremadamente sucintas, limitándose simplemente -sin hacer comentario alguno pero remarcando mediante los tipos de imprenta la diferencia existente entre los cementerios propiedad de las parroquias y los de la administración local- a transcribir la normas sobre el derribo de tapias que figuraba en el texto de la ley y, así, señalaba que cuando el cementerio fuese "*municipal*"⁽⁵⁸⁾... No podrá haber en él una parte destinada para los católicos y otra

(56) El punto 52 aludido recogía la doctrina eclesiástica sobre la materia; "Por último, la Santa Iglesia ordena en sus leyes, que donde no permitan la existencia de cementerios propiedad de la Iglesia, procuren los Obispos que los cementerios propios de la sociedad civil sean bendecidos, si la mayor parte de los que en ellos han de ser sepultados, son católicos, como ocurre en España; que si no se puede lograr que permitan la bendición de todo el cementerio, se procure que haya una parte reservada a la sepultura de los católicos y esta parte sea bendecida; y que ni siquiera esto se puede conseguir, que sean bendecidos cada uno de los túmulos cuando en ellos haya de ser depositado un cadáver. Así lo ordena el canon 1.206." (Ver apéndice núm. 3)

(57) 24 de febrero de 1932, "Instrucción pastoral acerca de los Cementerios y protesta razonada sobre la secularización de los mismos", BOE de Iuy, año 73, 29 de febrero de 1932, núm.4, págs. 71-90.

(58) En bastardilla en el original.

reservada para los disidentes, debiendo la autoridad municipal hacer desaparecer el muro que separe el cementerio católico del civil."⁽⁵⁹⁾

El Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE, obispo de Salamanca, era el primero que, entre los boletines eclesiásticos consultados, publicaba una circular dando instrucciones concretas de actuación a sus parrocos en prevision de posibles ingerencias, incluso hipotéticamente coactivas, de la autoridad municipal en los cementerios eclesiásticos y ante las que los sacerdotes deberían oponerse totalmente, ya que a dichos recintos no era de aplicación la disposición de la ley sobre el derribo de las tapias de separación:

"32. Ningun derecho se concede en la citada Ley para que se intente derribar los muros de separación de los cementerios católico y civil, cuando el primero es propiedad de la Iglesia o la Parroquia. En el caso, pues, de que por alguien se pretendiere dicho derribo, deberán oponerse terminantemente los Párrocos o Rectores de Parroquias, y si mediare coacción de fuerza o violencia protestarán con testigos y Nos lo denunciaremos a la mayor brevedad."⁽⁶⁰⁾

En la circular que el DR. PLA Y DENIEL, obispo de Avila, suscribió el 5 de marzo dando orientaciones sobre cementerios y enterramientos, se expresaba en los mismos términos al tiempo que precisaba, previa una minuciosa descripción de las distintas clases de cementerios que

(59) s.f., "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de Cementerios", BDE de Astorga, año 80, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 81-89.

(60) 1 de marzo de 1932, "Circular del prelado.- Sobre la Ley secularizadora de Cementerios", BDE de Salamanca, año 79, 1 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 62-66.

podían considerarse de carácter general, qué debía entenderse por cementerios parroquiales, en los cuales, mientras no mediara incautación legal, no cabía ingerencia municipal alguna con apoyo en la ley secularizadora. La circular contenía igualmente unas minuciosas normas sobre la actuación a seguir por los sacerdotes en previsión, fundamentalmente, de las inhumaciones que, en base a las disposiciones de la ley, podían hacerse en lo futuro en cementerios consagrados. Era, además, el primer documento, entre los consultados, en que se aludía al rendimiento económico derivado de la gestión de los cementerios.

"Ante la nueva ley sobre cementerios y enterramientos de 30 de Enero último, de la cual Nos lamentamos y protestamos por ser atentatoria contra los legítimos derechos de la Iglesia, juzgamos necesario dar las siguientes instrucciones a los parrocos y superiores de religiosas de clausura:

«12. Cementerios municipales nuevos.- Respecto de los cementerios, que los Municipios construyan en adelante, deberán tenerse muy en cuenta las disposiciones del canon siguiente, especialmente lo que se ordena en su § 3.

«Cánon 1.206.- § 1. La Iglesia tiene derecho de poseer cementerios propios.- § 2. Si este derecho de la Iglesia es violado, ni hay esperanza de que la violación sea reparada, procuren los Ordinarios de los lugares que los cementerios, propios de la sociedad civil, sean bendecidos, si los que en ellos suelen ser sepultados, son católicos en su mayor parte, o por lo menos que los católicos tengan para si lugar reservado y este bendecido.-§ 3. Si ni esto pudiera conseguirse, bendigase toties quoties, según los ritos prescritos en los libros litúrgicos aprobados, cada una de las sepulturas.»⁽¹⁾

«Confiamos al celo y prudencia de los parrocos el conseguir de los Municipios, si las circunstancias lo aconsejan, la bendición general del nuevo cementerio. Si esto no se obtuviera,

(61) En bastardilla en el original.

procederán a la bendición de cada sepultura *toties quoties*.

«21. Cementerios municipales existentes.- Estando todos ellos actualmente bendecidos, advertimos a nuestros parrocos que tan solo quedarán violados y perderán la bendición por los actos siguientes, con tal que sean ciertos, notorios y ejecutados en el mismo cementerio: 1º. por delito de homicidio; 2º. por la grave e injuriosa erusión de sangre; 3º. por haber sido destinado el cementerio a usos impíos o sordidos; 4º. por la sepultura de un infiel o de un excomulgado, despues de sentencia declaratoria o condenatoria...» (Canon 1.172 § 1). Por tanto no queda violado un cementerio por la sepultura de un católico no excomulgado aun cuando fuese indigno de la sepultura eclesiástica, como por ejemplo un suicida.

«Si ocurriese alguno de estos casos y las autoridades civiles no pudiesen dificultad, deberá reconciliarse el cementerio por el parroco segun el rito prescrito en los libros liturgicos aprobados. Si las autoridades se opusiesen a la reconciliación general del cementerio, podrán bendecirse en una o varias veces, pero con bendición singular para cada una, las sepulturas o nichos pertenecientes a personas o familias que viven cristianamente y desean recibir sepultura eclesiástica. En caso de que tampoco esto pudiera hacerse, será preciso bendecir en cada caso la sepultura, conforme al §3 del canon 1.206 antes citado.

«Si por cualquiera causa justa y razonable no fuera posible bendecir la sepultura antes de inhumar en ella el cadáver de un cristiano fallecido en la comunión de los fieles, de conformidad con lo que para caso análogo prescribe el Rit. Rom., Rit. VI. Cap. I, numero 24, se procurara bendecirla despues y dejando pasar el menor tiempo posible, cuidando siempre de hacer colocar una cruz sobre aquella sepultura para significar que el allí enterrado murió en la paz de Cristo.

«31. Cementerios parroquiales.- Se han de tener como tales los que han sido construidos con fondos de la parroquia; aquellos cuya posesión de

tiempo inmemorial viene teniendo la misma; aquellos de los cuales esta ha cobrado los derechos de sepulturas perpetuas o actualmente o en otros tiempos, (por ejemplo antes de la implantación del arreglo parroquial), derechos por rompimiento de sepulturas, lo cual puede comprobarse revisando los libros de cuentas; y en caso de duda la presunción hasta ahora según la misma ley civil ha estado en favor de la parroquia. No prueba que el cementerio sea municipal el hecho de que el Municipio costeara una ampliación u obras de reparación, a cambio de lo cual algunas veces la parroquia no cobraba derechos de rompimientos de sepultura.

«La prescripción del artículo 12 de la nueva ley de que se hagan desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los confesionales, cuando sean contiguos se refiere a los cementerios municipales, "" de los cuales trata dicho artículo y por tanto deben oponerse los párrocos a la pretensión de dicho derribo en los cementerios parroquiales, "" y si mediase coacción de fuerza o violencia deberían protestar y ponerlo en nuestro conocimiento.

«En caso de violación del cementerio parroquial "" por la sepultura de un excomulgado o de un infiel, no se reconciliará antes de que haya sido exhumado el cadáver, si la exhumación puede hacerse sin grave inconveniente. (Canon 1.175). ""

(63) En bastardilla en el original.

(64) 5 de marzo de 1932, BOE de Avila, año 43, 11 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 97-102. Normas idénticas se contenían en la "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos" publicada por el BOE de Barcelona de 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 109-120, reproducida en el BOE de Mallorca de 31 de marzo de 1932, núm. 8, págs. 172-184. También el obispo de Segovia DR. Luciano PÉREZ PLATERO las incluía en la pastoral que publicaba el BOE de la diócesis de 13 de marzo de 1932 ("Esta misma conducta debe observarse con respecto al derribo de las tapias que separan el cementerio civil de los cementerios parroquiales, puesto que la prescripción del artículo 12 solamente se refiere a los cementerios municipales, de los que allí trata la ley") (BOE de Segovia, año 77, núm. 5, págs. 109-115). La "Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos" de 17 de marzo de 1932 del obispo de Calahorra, DR. Fidel GARCÍA MARTÍNEZ, puntualizaba igualmente los casos de violación de los cementerios municipales y la conducta a seguir por los párrocos ante los mismos o en el caso de construcción de nuevo cementerio municipal ("... o con la misma equivocación se propasase [algún municipio] a derribar la tapia de separación entre el cementerio parroquial y el civil, tal vez contiguo, ya que ese derribo sólo lo dispone la ley respecto a los cementerios municipales, a los que, únicamente, se refiere el apartado 12, art. 12 de esta" (BOE de

Ya hemos reseñado que la pastoral del Dr. Isidro GOMA de 30 de marzo de 1932 incluía en su parte final unas "normas prácticas" relativas a puntualizaciones sobre la cuestión de cementerios y enterramientos tratada en ella. Las siete primeras normas explicitaban el contenido de la ley, señalando, en forma similar a la efectuada por el obispo de Avila, las diferencias entre los distintos tipos de cementerios y las causas de violación de los consagrados, de las que un apartado especial merecían, como es lógico, los efectos que podía producir el derribo de las tapias de separación del cementerio confesional del civil.

No se recataba el Dr. GOMA de decir claramente, aunque no hubiera fundados indicios para esta aseveración, que el fin del legislador no era otro que el lograr la municipalización de todos los cementerios existentes. Pero hay que remarcar que las normas por él dictadas en la cuestión de cementerios y especialmente en el tema al que nos referimos en este epígrafe, si bien seguían las puntualizaciones efectuadas por el Dr. PLA Y DENIEL, resultaban, debido a las detalladas aclaraciones que hacía las más laxas y menos exigentes de todo el episcopado, según los documentos analizados.

"Normas prácticas".- Las indicamos en la siguiente enumeración, clasificándolas según los epígrafes de la Instrucción presente.

Calahorra, año 73, 22 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 49-58). La misma normativa contenía la "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles" del arzobispo de Sevilla de 31 de marzo de 1932, reproducida en el boletín eclesiástico de Tenerife correspondiente a marzo-abril, núms. 3-4, págs. 37-44; también la incluía el documento titulado "Sobre cementerios" publicado en el boletín eclesiástico de Vitoria de 1 de abril de 1932 (año 68, núm. 8, págs. 219-221) y reproducido por el de Zaragoza de 2 de mayo (año 71, núm. 9, págs. 171-174). Ya a finales de 1933 insistía en ella el arzobispo de Burgos, que en el boletín de la archidiócesis de 15 de noviembre, varios meses después de la publicación del Reglamento que desarrollaba la ley de cementerios, recordaba a sus párrocos las causas de su violación y la forma en que debían proceder para reconciliarlos. (BOE de Burgos, año 76, 15 de noviembre de 1933, núm. 19, págs. 347-348).

(a) Cementerios.

«Indicamos las normas relativas a este punto según se nos sugieren por el articulado del Decreto (sic) sobre secularización de cementerios que damos en otro lugar de este número del BOLETÍN, y según el orden numérico de los artículos.

«1.- Art. 12.: "Los cementerios municipales serán comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales. En las portadas se pondrá la inscripción de "Cementerio municipal". El fin del legislador es la municipalización de todos los cementerios: pero, mientras a ello no se haya llegado, reconoce, como aparece de este mismo artículo y del siguiente, cementerios "parroquiales" y otros de "carácter privado" que, como se verá, no se sujetan por ahora a la ley común.

«2.- "Las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los confesionales, cuando sean contiguos".- Se entiende si el cementerio confesional no es parroquial; la razón es que en este apartado del artículo se habla solamente de cementerios municipales; en el régimen de los parroquiales se procedera absolutamente como hasta aquí mientras no deba hacerse "con sujeción a las bases que se establezcan por el poder ejecutivo" y que no se han publicado todavía."

Era el Dr. GOMA entre los prelados que vamos viendo que se refirieron a este tema, el único en hacer una enumeración taxativa de los cementerios que en su diócesis eran, según su propiedad, parroquiales según los datos existentes en el obispado, y el primero en recomendar a sus sacerdotes que hicieran las oportunas investigaciones y recopilaciones de todos los datos que pudieran demostrar, en su caso, el derecho de propiedad de la Iglesia sobre los cementerios de sus respectivas localidades, amén de recordarles que sobre ellos, y a tenor de la nueva ley, no tenía la autoridad municipal competencia alguna, debiendo estar al tanto de la publicación de las bases para su incautación anunciadas en aquella.

"3.- Se entiende por cementerios parroquiales aquellos que han sido construidos con fondos de la parroquia, o cuya antigüedad legitime la presunción de que son estrictamente parroquiales, ya que mas arriba de setenta u ochenta años no se daban mas que cementerios propiamente parroquiales. En nuestra diócesis de Tarazona son ciertamente parroquiales segun datos obrantes en los archivos de esta Curia, los cementerios de Aldehuela de Tobed, Paracuellos de Jalón, Villanueva, Purujosa, Alcalá de Moncayo, Litago, Los Fayos, Santa Cruz de Moncayo, Aldehuela de Agreda, Fuentes de Agreda, Montenegro, San Felices y Valdelagua. Cuiden los señores Curas de averiguar, por todos los medios, registro de archivos, forma de administración, historial del cementerio, referencias de vecinos antiguos, etc. y de puntualizar los derechos de la Iglesia sobre la propiedad de los cementerios, y procedan en consecuencia en lo que se refiere a posibles ingerencias de la autoridad municipal, que hasta ahora no tiene sobre los cementerios parroquiales mas derechos que los que dimanen de la legislación anterior al Decreto [sic] que comentamos; y estén prevenidos para cuando por el Poder ejecutivo se establezcan las bases que hayan de regular la materia de incautación de los cementerios parroquiales."

Era tambien el único prelado que haria una enumeración de aquellos cementerios que podian considerarse de propiedad mixta, al haber concurrido a su construcción tanto la parroquia como el municipio; excluidos estos y los anteriormente reseñados los restantes deberian ser considerados de exclusiva propiedad municipal y en ellos, y esto es importante destacarlo, los parrocos debian consentir el derribo de las tapias de separación del recinto confesional y del civil (curiosa y reveladoramente llamado en el argot de la época, como el documento recogia con lo que no deja de parecer una frívola falta de caridad y respeto, pero que indudablemente respondia al interés eclesiástico en diferenciar la consideración a dar a uno y otro lugar, el "corralillo") sin oposición alguna. Actitud que, sin embargo, no debía darse en el caso de los

cementerios mixtos, cuyo derecho de propiedad eclesiástica debía ser previamente incautado, a tenor de las bases a dictar, para que sobre ellos pudiera existir la exclusiva competencia municipal.

"4.- A mas de los cementerios parroquiales hay los municipales, que han sido construidos exclusivamente con fondos del municipio, y los mixtos, a cuya construcción han concurrido solidariamente la parroquia y el municipio. Son de esta última categoría, en la diócesis de Tarazona, los cementerios de Calatayud, Furroy, Velilla, Viver de Vicort, Aceded, Alarba, Aldehuela de Liestos, Abanto, Castejón de Alarba, Iulebras, Alfaro, Villalengua, Borja, Carenas, Godojos, Olives, Malon, Torrellas, Vierlas, Agreeda, Añavieja, Castilruiz, Devanos, Fuentesbrun, Matalabreras, Frebago y Vozmediano, y en la de Tudela el de Fontellas; todos los demás, deducidos los parroquiales, son propiamente municipales. En estos últimos consentirán los señores curas que se derriba la tapia que separa el cementerio del lugar llamado vulgarmente "corralillo" o cementerio civil. En cuanto a los mixtos, siendo adverso el mandato a nuestro derecho eclesiástico, y particularmente esperandose las bases que regulen la incautación de los cementerios parroquiales, y en parte lo son los mixtos, creemos que se puede vindicar el derecho a la conservación del *statu quo*, hasta que el legislador provea sobre las condiciones de la incautación."

La razón de la benevola actitud que recomendaba a sus parrocos respecto al consentimiento del derribo de las tapias en los cementerios municipales, tan diferente de la que hemos visto esgrimida por el obispo de Barcelona, radicaba en las detalladas consideraciones que en la norma quinta hacia respecto a las consecuencias de tal derribo y a la consideración de cuando un cementerio bendecido debía o no considerarse violado.

"5.- La mera desaparición de tapias divisorias del cementerio católico bendecido y del cementerio civil no bendecido, no importa la violación del bendecido, con tal que permanezca y subsista este en la misma disposición anterior

con idéntica finalidad y con la consiguiente separación, aunque no se marque esta en adelante por el muro o tapia. La razón es porque, si bien el canon 1210 prescribe que todo cementerio ha de estar "cerrado convenientemente por todos sus lados y cuidadosamente custodiado", pero debe interpretarse en relación con el canon 1212, según el cual habrá otro lugar, también cerrado y guardado, "si es posible tenerlo", para los privados de sepultura eclesiástica; de donde se deduce: a) que no se exige en absoluto para estos otro lugar igualmente cerrado y custodiado, sin tan solo si *haberí queat*; b) que en ninguno de los dos cánones se exige estén cerrados los cementerios con muro o tapia, y por tanto basta se halle cerrado con verja, estacada, espinos, setos o vallado; lo que confirma, c) por el texto del canon 1206, párr. 2º, por el que se dispone que cuiden los Ordinarios, refiriéndose a los cementerios civiles comunes, "que los católicos tengan en ellos reservado un lugar especial y bendecido"; luego basta que exista este lugar, sin que la falta de tapia o muro importe la violación del mismo. Y aun puede tener la misma puerta y pasarse por el bendecido al no bendecido sin que se profane y viole el primero.

«6.- El cementerio no se viola propiamente sino por los actos que taxativamente enumera y determina el canon 1.172 en relación con el 1.207, y que han de ser ciertos, notorios y puestos en el mismo cementerio, que son: el delito de homicidio, injuriosa y grave erusión de sangre, aplicación a usos impropios o sordidos y sepultura de infiel o excomulgado después de sentencia declaratoria o condenatoria. Tratándose de cementerios, para lo que pueda ocurrir, lo que más puede interesar es lo comprendido en el último extremo, o sea la sepultura de infiel o excomulgado *post sententiam*.

«Por la sepultura de un simplemente indigno y aun excluido de sepultura en pena de ciertos delitos, o de pública, reprobable e impenitente conducta, no se viola propia y estrictamente el cementerio bendecido, aunque, pudiendo, no deba en este ser enterrado. Solamente se viola por la sepultura de infiel o excomulgado *post sententiam*. Para estos efectos, "infel", según autores de nota, *est quis qui voluntarie vivit non baptizatus*: luego según estos autores, no debería estimarse infiel el hereje bautizado, ni el catecúmeno, ni el infante no bautizado, *saltem si ortus sit a parentibus fidelibus*."

La laxitud destacada de estas normas llegaba hasta el extremo, lo cual era ciertamente una forma mas de entender los intereses eclesíasticos, de no dar relevancia al hecho. segun parece de cierta frecuencia en la Republica, de que hubieran padres que se negaran al bautismo de sus hijos, tema incidentalmente puesto de manifiesto en esta pastoral y que era considerado por el Dr. GOMA como debido a "influencias extrañas y pasajeras", no haciendo el entierro de estos infantes absolutamente necesaria la reconciliación de los cementerios bendecidos.

"En las actuales extraordinarias circunstancias, bien puede estimarse que no existe este animo en los padres, aunque aparezcan remisos y aun opuestos al bautismo de sus hijos, como se han dado ya desgraciadamente algunos casos, debido a influencias extrañas y que consideramos pasajeras. Y aunque haya otros autores que lo contradicen, como quiera que los hechos, segun el canon 1.172, deben ser ciertos y notorios, bien puede decirse que faltando esta certeza no se da tal violación en la sepultura de estos infantes; y aunque pudieran reconciliarse *ad cautelam*, segun el canon 1.174, no es absolutamente necesario."

Pero aun si se daba el caso de que el cementerio hubiera sido violado por el entierro de alguien condenado por la Iglesia, tal violación no quitaba el caracter sagrado del lugar, que deberia reconciliarse, para poder continuar con las funciones religiosas que venia desempeñando, una vez exhumado el cadaver objeto de tal violación, mas si esto era imposible, tampoco excluia la posibilidad de tal reconciliación.

"Aun en el caso de violación por sepultura de infiel formal o excomulgado *post sententiam*, cosa poco probable, es de notar que la violación no quita el caracter sagrado del lugar, sino solamente la aptitud para la decorosa celebración de sagradas funciones antes de la expiación o reconciliación, sin que se pueda, como dice el canon 1.173, celebrar oficios, administrar sacramentos, enterrar muertos. Aunque la reconciliación debe practicarse *quam citissime*, debe tenerse en cuenta el canon 1.175, segun el

cual no debe practicarse antes de la remocion del cadaver, *si remotio sine gravi inconvenienti fieri possit*. Y como las leyes eclesiasticas no obligan con grave inconveniente, no pudiendo removerse, o aislar o cercar el cadaver, podra hacerse la reconciliacion a modo de expiacion o preces penitenciales, sin la remocion, o en ultimo caso hacer la bendicion en cada sepultura antes de nueva inhumacion."

Trataba por ultimo el prelado de la administracion de los cementerios, parraro del que es importante destacar el énfasis puesto en la necesidad de administracion conjunta, es decir, sin renuncia de ningun privilegio de los hasta entonces detentados por las parroquias, en el caso de los cementerios de caracter mixto y aun incluso sin renuncia de la jurisdiccion puramente eclesiastica en los municipales.

"7.- Sigue el mentado artículo 12.: "La guarda, administracion, conservacion y regimen de enterramientos en dichos cementerios (los municipales) corresponde a la autoridad municipal". Luego las mismas funciones corresponden a la autoridad eclesiastica si se trata de cementerios propriamente parroquiales. Y ambas autoridades, civil y eclesiastica, intervendran conjuntamente en el ejercicio de dichas funciones si los cementerios son mixtos. Todo ello debe entenderse de la administracion economica. Pero, prescindiendo de la cuestion de la propiedad de los cementerios municipales, que el Estado ha tallado a su ravor (R.O. 28 Abril 1866), contra los principios del derecho eclesiastico segun el cual la constitucion solemne de un lugar pio es verdadero titulo de propiedad en ravor de la Iglesia, queda aun, en los cementerios costeados total o parcialmente por el municipio u otra entidad y luego bendecidos por la Iglesia, la jurisdiccion de esta que es consecutiva a la bendición o consagracion. Por lo mismo, los señores Curas, aun tratándose de cementerios municipales, toda vez que no hay uno solo que no esté bendecido, deberán conservar la llave que de ellos tengan, y procurar por todos los medios su retención, que es muy compatible con las funciones encomendadas al municipio y a fin de poder cumplir con los deberes que de aquella jurisdiccion derivan; atender a los que en adelante y aun segun la legislacion actual deseen ser sepultados en

tierra bendita y con los ritos y ceremonias de la Iglesia y los respetos correspondientes a su condición, procurar el respeto a los lugares sagrados, atender al cuidado y culto, si lo hubiere, de la capilla, velar por el cumplimiento de las disposiciones canónicas sobre las tumbas, inscripciones etc." ***

El boletín eclesiástico de la diócesis de León de 31 de marzo publicaba el texto de la ley y, tras ella, unas "acotaciones" a la misma en las que, después de definir que debía considerarse como cementerios municipales - aquellos construidos con fondos del municipio- resaltaba el carácter sagrado de estos al estar todos bendecidos, señalando las causas por las que podían perder tal carácter. A continuación transcribía el canon relativo a la bendición de cementerios, destacando de él los casos en que debía bendecirse cada sepultura:

"a) cuando el cementerio no está bendecido; por ejemplo, los cementerios que construyan, en cumplimiento de la nueva Ley, los Municipios, al menos que estos autoricen la bendición de todo el cementerio, o de una parte de él, para los católicos; b) si después de derribadas las tapias que separan el cementerio civil del municipal o católico, es conducido el cadáver a ser enterrado en la parte que fue cementerio civil; y c) cuando en un cementerio ya bendecido ocurre algunos de los casos que señala el canon 1.207 con relación al 1.172 citado."

Trataba seguidamente de los cementerios parroquiales, sobre los que señalaba que "ni los Alcaldes, ni los Ayuntamientos pueden hoy hacer desaparecer... las tapias que separan estos del cementerio civil" y, a continuación, indicaba que eran "cementerios mixtos" los que habían sido construidos por la Iglesia y por el Municipio, siendo administrados por ambas partes.

(65) 30 de marzo de 1932, "El laicismo póstumo.- Instrucción pastoral sobre cementerios y sepulturas", BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 704, págs. 207-239.

Por último señalaba que de todos los actos que las autoridades civiles cometieran contra los cementerios, siempre que fueran atentatorios al derecho de la Iglesia como lo era, la diferencia de las posturas mantenidas por los obispos de Iuy, Avila y Terazona, el derribo de las tapias, no solo en los cementerios parroquiales sino también en los municipales- los parrocos formularian por escrito ante las autoridades civiles la correspondiente protesta y que en todos los casos que considerasen graves, dudosos o en que estimaran que así debían proceder, acudirían a la curia exponiendo lo acontecido con todos los datos y antecedentes.⁽⁶⁶⁾

En las mismas ideas hasta aquí apuntadas abundaba el arzobispo de Sevilla en su "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles" de 6 de marzo, que hacia suya el día 31 del mismo mes el obispo de Tenerife, Fr. Albino GONZALEZ MENENDEZ-REIGADA, al no considerar el derribo de la tapia causa de pérdida del carácter sagrado del recinto.

"Aunque la ley civil seculariza los cementerios católicos y haya sido derribada la tapia de separación del cementerio civil, sin embargo deben considerarse como lugares sagrados mientras no queden violados como tales."⁽⁶⁷⁾

El boletín eclesiástico de la diócesis de Vitoria de 1 de abril de 1932 incluía unas normas del vicario general destinadas a los parrocos y reproducidas en el de 2 de mayo de la diócesis de Zaragoza, señalando claramente que los ayuntamientos no podían, entre otros actos, derribar las tapias de separación cuando el cementerio fuese parroquial

(66) s.f. "Anotaciones a la anterior Ley de Cementerios", BOE de León, 31 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 112-118.

(67) 6 de marzo de 1932, "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles", BOE de Sevilla, año 75, 7 de marzo de 1932, núm. 1201, págs. 92-97 y BOE de Tenerife, 1932, marzo y abril, núms. 3 y 4, págs. 37-44.

"no solo sin alterar gravísimamente a las leyes eclesiásticas, sancionadas con gravísimas penas, pero ni siquiera lo pueden hacer según la misma ley civil recientemente publicada".⁽⁶⁸⁾ Dados los intentos de incautación de los cementerios parroquiales por parte de algunos de los ayuntamientos de la diócesis estas normas serían publicadas nuevamente el 15 de junio, pero anteriormente, el 15 de abril, en la "Sección de Consultas" se insistiría en la cuestión de los cementerios al reproducir las publicadas anteriormente por el arzobispo de Sevilla -que el boletín eclesiástico de Vitoria indicaba que las tomaba del de Canarias- sobre cementerios y sepulturas y que tendían a interpretar la frase del artículo primero de la ley: "Las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los confesionales cuando sean contiguos", indicando que como todo el párrafo en que tal frase figuraba hablaba de los cementerios municipales, "a estos solamente podían referirse las palabras transcritas" y añadiendo, para mayor aclaración: "Por tanto, cuando los cementerios civiles están adosados a los cementerios parroquiales, no pueden los municipios derribar la tapia que los separa. Sería violar un derecho de propiedad", planteamiento este nuevo que, como se ve, se ceñía a una cuestión de medianerías.⁽⁶⁹⁾

Esta aclaración, que, como hemos visto, había sido expresado claramente en las normas dadas por el mismo vicario general de Vitoria, volvía a repetirse en los "Avisos a los encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales" que publicaba el 16 de abril el boletín eclesiástico de Santiago de Compostela, advirtiendo

(68) s.f. "Sobre cementerios", BOE de Vitoria, año 68, 1 de abril de 1932, núm. 8, págs. 219-221 y 15 de junio de 1932, núm. 13, págs. 325-327 y BOE de Zaragoza, año 71, 2 de mayo de 1932, núm. 9, págs. 171-174.

(69) s.f. "Sección de consultas.- Sobre cementerios y sepulturas", BOE de Vitoria, año 68, 15 de abril de 1932, núm. 9, págs. 241-243.

"Que por ninguna razon, mientras el cementerio sea parroquial, han de consentir el derribo de sus muros para unirlo al cementerio civil, pues ningún derecho se concede para esto en la citada ley." (70)

Respecto al pronunciamiento de la autoridad civil sobre el tema del derribo de las tapias de separacion, con independencia de los actos de intervencion a nivel local reseñados, tenemos que senalar aqui que el boletin eclesiástico de Barcelona -diócesis indudablemente interesada en la cuestion- publicaria el 31 de octubre de 1932, entre otras, la circular del gobernador civil de Leon de 4 de marzo anterior en la que se determinaba que "ni los Alcaldes ni los Ayuntamientos pueden hoy hacer desaparecer en los cementerios parroquiales las tapias que separan estos del cementerio civil, ni mucho menos proceder a la incautacion de tales cementerios, debiendose atener a las normas que se establecieron en su dia por el Poder Ejecutivo." (71) Esta circular, tan acorde con la postura eclesiástica, habia sido publicada en primer lugar por el boletin eclesiástico de Astorga y a esdta publicacion seguiria, entre otros, la dada por el boletin de la diócesis de Barcelona. (72)

Por ultimo el boletin eclesiástico de la archidiócesis de Burgos, ya en noviembre de 1933, varios meses despues de la promulgacion del reglamento para la aplicacion de la ley de cementerios, incluia unas normas

(70) s.f., "Avisos a los encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales", BOE de Santiago, año 71, 16 de abril de 1932, núm. 2672, págs. 76-77.

(71) varias fechas, "Poder civil.- Decisiones sobre incautación de cementerios parroquiales", BOE de Barcelona, año 75, 31 de octubre de 1932, núm. 2, págs. 430-431.

(72) Ver la nota 105 de este capítulo.

sobre "Violación y reconciliación de cementerios" señalando que "la sepultura de un católico indigno de ella, no causa, violación, ni tampoco el derribo de la tapia de separación del cementerio civil, ordenado por la ley de secularización."'''

Más con anterioridad a la publicación de estas normas por el boletín eclesiástico de Burgos, habían tenido lugar las conferencias de metropolitanos de 1932 y 1933.

Como hemos indicado en el capítulo precedente, en la de 1932, celebrada los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre se incluiría, como octavo de los temas a tratar y bajo el epígrafe conjunto de "Problemas religioso-legales", la cuestión de la ley de cementerios en unión de las relativas a "Entierros y Viáticos", "Matrimonio", "Obra pía seglar del Ministerio de Estado", "Preceptos legales sobre manifestaciones exteriores del culto", "Situación de la Iglesia en el aspecto fiscal o tributario" y "Concordato y Convenio-ley de Capellanías de 1867".

El acta final de esta conferencia tan solo recoge, en el ámbito de la problemática planteada por la ley de cementerios, la derivada de las incautaciones y la conducción de enterramientos, como en el epígrafe correspondiente veremos, y ello porque en las conferencias episcopales previas y preparatorias de la de metropolitanos fueron estos los dos únicos temas abordados como acuciantes.

Tan solo en la conferencia episcopal de Sevilla, celebrada los días 21 y 22 de octubre de 1932, se aludiría a la cuestión de la demolición de las tapias de separación, como consecuencia, probablemente, del atropello que había supuesto, según hemos visto, la efectuada en el cementerio

(73) s.f. "Violación y reconciliación de cementerios", BOE de Burgos, año 76, 15 de noviembre de 1933, núm. 19, págs. 347-348.

sevillano, por lo que se puso de manifiesto el trato discriminatorio que por la autoridad civil se había dado al cementerio católico en comparación con los de otras confesiones:

"La ley de cementerios es injusta y atentatoria a los derechos de la Iglesia; y la injusticia resalta todavía más si se tiene en cuenta que de los cementerios de las diversas religiones que existen en la Ciudad de Ceuta, la Autoridad Civil sólo ha secularizado el cementerio católico, derribando el muro que lo separaba del civil, respetando los cementerios hebreo y musulmán, que continúan lo mismo que antes."⁽⁷⁴⁾

En 1933 tendrían lugar dos conferencias de metropolitanos, la primera, de carácter extraordinario, celebrada los días 27, 28, 29 y 30 de junio sobre las cuestiones más acuciantes del momento y la ordinaria celebrada en el mes de octubre, en la que, ya suficientemente planteada la problemática derivada de la ley de cementerios y de su reglamento, tan sólo se propuso como tema de análisis el de si debería ser aceptada la cantidad que los ayuntamientos ofertaran para realizar la incautación de los cementerios parroquiales -punto este en el que seguidamente entraremos- razón por la que ninguna conferencia de sufragáneos trató la cuestión del derribo de las tapias de separación entre los cementerios católico y civil.

(74) *Exé debate i Estat durant la segona República*, III, págs. 332-335 y 385-389.

3.2. La incautación de los cementerios parroquiales. Obispos y arzobispos de Palencia, Tuy, Santiago de Compostela, Astorga, Calahorra y La Calzada, Salamanca, Oviedo, Tarragona, León y Avila.

A pesar de todos los pronunciamientos de la jerarquía eclesiástica y de las voces aisladas de la civil, el arian secularizador de las autoridades municipales no se iba a ceñir al ámbito de los cementerios de su propiedad en los que, como hemos visto, muchas de ellas se apresuraban a derribar las tapias de separación de los recintos católico y civil sin apoyatura legal alguna. También se extendía a los cementerios parroquiales, propiedad de la Iglesia, de los que muchos ayuntamientos intentaron incautarse con anterioridad incluso a la promulgación de la normativa que les permitiera su expropiación. Este ansia secularizadora municipal hizo que el episcopado tuviera que apresurarse a dar normas a sus párrocos sobre la actitud a adoptar ante cualquier intento de incautación, al tiempo que no dejaba de elevar su más energética protesta.

Ejemplo de tal actuación lo encontramos en las normas dadas por la vicaría general del obispado de Palencia el 11 de enero de 1932, aparecidas antes de la promulgación de la ley, en las que se contenía una frontal oposición a toda ingerencia municipal en los cementerios, ya fueran de su propiedad -en los que, como habían hecho los obispos de Orense y Barcelona, se rechazaba cualquier resolución secularizadora, es decir, especialmente la relativa al derribo de las tapias de separación, mientras no hubiera norma legal que amparara este acto- o parroquiales -que el

autor calificaba en esas fechas de "privados", toda vez que el proyecto de ley no hacia la distinción que después haria la ley entre unos y otros para darles distinto tratamiento-" sobre los que se destacaba, por la misma razon de falta de ley, la prohibición de cualquier actuación municipal, que, en su caso, los parrocos deberian rechazar y comunicar al obispo, a fin de que este pudiera actuar en consecuencia.

"...parece lógico que las autoridades civiles han de abstenerse de adoptar resolución alguna en esta materia, siquiera por respeto a la soberanía de las Cortes, que son las que en definitiva han de fijar la forma y modo de llevar a la practica el precepto constitucional," interin no sobrevenga la aprobación del indicado proyecto de ley."

"Claro está que tratandose de cementerios parroquiales, de la propiedad de la Iglesia, o sea, de los de caracter privado a que se refiere en su articulado dicho proyecto de ley, cualquier medida que se adoptare por las autoridades civiles, seria atentatoria contra la propiedad, ya que sin previa expropiación y sin mediar revelación del Gobierno, en este sentido, vendria a contravenir al texto del articulo 44 de aludida Constitución.(sic)"

"Como consecuencia de lo expuesto, y para instrucción de los señores párrocos debemos consignar:

"12. Que mientras no recaiga aprobación de las Cortes respecto al modo y forma de llevar a cabo la secularización de cementerios, establecida en el precepto constitucional antes citado, las autoridades civiles no están autorizadas para

-
- (75) Ver el proyecto de ley en el apéndice núm. 1.
- (76) Se refiere al articulo 27 de la Constitución, Ver la nota 5 de este capitulo.
- (77) La ley de cementerios. Ver la nota 7.
- (78) Se trataba del articulo relativo a la propiedad, cuyo párrafo segundo decia: "La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes."

adoptar ninguna clase de medidas en orden a esta materia, cualquiera que sea la naturaleza -municipal o parroquial- de los cementerios. Por lo cual toda determinación que adoptaran dichas autoridades en el sentido expresado, deberá ser objeto de formal protesta ante las mismas por los señores párrocos, sin perjuicio de ponerla en conocimiento de Rvdmo. Prelado de la Diócesis cuanto antes les sea posible.

«2º. Que tratándose de cementerios parroquiales pertenecientes a la Iglesia, está vedado a dichas autoridades municipales tomar acuerdos o resoluciones atentatorias a la propiedad de los mismos; y por tal razón los señores párrocos se opondrán a que en los cementerios parroquiales puedan llevarse a cabo los indicados acuerdos de aquellas autoridades, poniéndolo asimismo inmediatamente en conocimiento del Reverendísimo Prelado.»⁽⁷⁹⁾

A pesar de esta manifestación de la postura eclesiástica con la lógica oposición a cualquier intervención municipal en el ámbito de los cementerios, tanto municipales como parroquiales, al no estar aun aprobada la ley y, especialmente, la negativa a cualquier ingerencia municipal atentatoria del derecho de propiedad de la Iglesia sobre los de las parroquias, paradójicamente uno de los primeros prelados en tener que proceder contra una indebida actuación municipal fue, precisamente, el propio obispo de Palencia, que el 8 de marzo de 1932 hubo de elevar formal protesta al alcalde de la ciudad a causa de las disposiciones secularizadoras de la corporación respecto al cementerio palentino, el cual, según su reglamento de 1843, tal como hacía constar el Dr. PARRADO GARCÍA, pertenecía proindiviso al municipio y a la Iglesia y, por tanto, no podía aquél atentar contra los derechos reconocidos a esta por la citada norma sin expropiarlos previamente.⁽⁸⁰⁾

(79) 11 de enero de 1932, "Sobre cementerios", BOE de Palencia, año 82, núm. 2, 21 de enero de 1932, págs. 53-54.

(80) 8 de marzo de 1932, BOE de Palencia, año 82, 17 de marzo de 1932, núm. 6, págs. 155-158.

Pero fue una vez promulgada la ley, y sobre todo el reglamento en su desarrollo, como después veremos, cuando, como ya hemos indicado, comenzarían a publicarse de forma continuada en todos los boletines eclesiásticos comentarios a la misma. Estos comentarios, unas veces con la rubrica del propio obispo, otras con la del respectivo vicario general, continuaban negando la validez de todo intento de incautación de los cementerios parroquiales por parte de la autoridad municipal apoyandose en la circunstancia de que la ley tan sólo aludía a la posibilidad -no a la obligatoriedad- de la incautación y a que, para ella, se procedería a la pertinente expropiación con arreglo a las bases que en su día dictaría el Poder ejecutivo, (*) no pudiendo, por tanto, expropiarse mientras dichas bases no hubieran sido formuladas. (**)

Esta línea de argumentación era la esgrimida por el obispo de Tuy, Dr. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, en su ya comentada pastoral de 24 de febrero de 1932, en la que, al igual que el obispo GOMA, veía en las disposiciones de la ley una clara tendencia a la municipalización de todos los

(81) Ver el párrafo segundo del artículo 12 de la ley en la nota 7.

(82) Muy expresiva de la situación creada por la aparición de la ley y de la actitud adoptada a raíz de ella por las autoridades municipales era la carta que el Dr. Félix BILBAO UGARRIZA, obispo de Tortosa, escribía al cardenal VIDAL el 22 de febrero de 1932: 'La estrepaloría Ley sobre cementerios del 31 pasado, ha removido las ansias de muchos Ayuntamientos para apoderarse de los cementerios parroquiales; sirve de ocasión para meterse con las aonjas de clausura y sus cementerios; y plantea cuestiones múltiples por el cerrillismo de muchos alcaldes, sobre manera de probar la voluntad del difunto en cuanto a querer enterramiento religioso... el Sr. Gobernador de Castellón no les pone dificultad en lo de las incautaciones... En lo de no incautarse sino previa expropiación, en un caso ocurrido, está el asunto pendiente, aunque temo se llegue a la incautación violenta, en el cual caso haré la oportuna protesta y reserva de derechos... P.D. Terminada esta carta recibo noticias sobre el caso de la pretendida incautación de un cementerio, diciendo que el acto de incautación se ha suspendido. Se conoce que al Sr. Gobernador le ha movido algo el oficio que le envié. Se trata de un caso en Castellón, (*Església i Estat durant la Segona...*, II, pág. 584, nota 42.)

cementerios, si bien no dejaba de señalar que la norma, al referirse únicamente a la "posibilidad" de incautación, no negaba a la Iglesia el derecho de poseer cementerios de su propiedad, aunque subrayaba que la previsión legal de esta mera posibilidad era ya una vulneración de los derechos eclesiásticos.

"En la ley de secularización de cementerios en términos expresos no se niega a la Iglesia el derecho de poseer cementerios propios; pero la tendencia bien clara se manifiesta, porque en el párrafo segundo del artículo primero se dispone que "los Municipios podrán incautarse de los cementerios parroquiales o de aquellos otros que de hecho presten el servicio de cementerio general dentro del término municipal respectivo." Esta disposición es evidentemente contraria al derecho de la Iglesia consignado como hemos visto en el canon 1206 § 12 y también en el canon 1208 § 1 que dice: "Las parroquias tengan cada una su cementerio, o no ser que haya uno común para varias constituido legítimamente por el Ordinario del lugar." Tenemos, pues, que someternos a esta ley civil, ~~mas~~ con la protesta, respetuosa sí, pero tan energética, cuanto cargada está de razón y de justicia."

De todas formas, seguía diciendo el prelado, si al amparo de la ley civil dicha incautación pretendía realizarse, habría de tenerse muy en cuenta que siempre lo sería mediante la correspondiente expropiación, la cual habría de sujetarse a las bases a que la ley aludía. Tal interpretación era la que, precisamente, había mantenido también el gobernador civil; por tanto, los párrocos deberían negarse a toda pretensión de entrega de llaves del cementerio parroquial formulada por cualquier ayuntamiento y, en todo caso, de existir coacción, deberían poner el hecho inmediatamente en conocimiento directo -no a través del obispo, como hemos visto en otros casos, debido, probablemente, a la buena disposición mostrada por la máxima autoridad civil de la provincia- del citado gobernador, dando parte del hecho al vicario general de la diócesis.

"Nótese, sin embargo, que si bien la Ley autoriza a los Municipios para que se incauten de los cementerios parroquiales y de otros propiedad de la Iglesia que presten servicio general, como el de Iuy, que es propiedad del Excmo. Cabildo Catedral; no autoriza para despojar a la Iglesia de sus propiedades y por eso continúa el parraro segundo del artículo primero diciendo que podran incautarse 'expropiando, en los casos en que así proceda, el derecho que sobre ellos pueda acreditarse, con sujecion a las bases que se establezcan por el poder ejecutivo.'

«Algunos ayuntamientos en esta provincia de Pontevedra han tenido el atrevimiento de incautarse del cementerio parroquial o de tomar el acuerdo de incautación y pasar a los respectivos parrocos el aviso señalándoles día para la incautación. Esta conducta es ciertamente ilegal y en sirecto contra ella hemos reclamado ante el Excmo. Señor Gobernador civil, quien con muy laudable prontitud y justicia declaró ilegal el acuerdo y abrió información para esclarecer las responsabilidades en que hubiera podido incurrir el Secretario de la corporación municipal.

«Y en verdad ¿como proceder legalmente a la incautación sin que preceda la expropiación y como realizar legalmente la expropiación, si esta ha de hacerse con sujecion a las bases que se establezcan por el Poder ejecutivo, cuando el Poder ejecutivo no las ha dado todavía? Por tanto sepámo bien los Señores Curas Parrocos y todos los administradores de cementerios propiedad de la Iglesia: no entreguen las llaves a los Ayuntamientos y si les coaccionan, pongan el caso inmediatamente en conocimiento del Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, sin dejar de dar cuenta enseguida al Ilmo. Sr. Vicario General del Obispado."'''

El boletín eclesiástico de la diócesis de Santiago de Compostela publicaria, por su parte, el 29 de febrero, unos "Avisos a los Encargados de parroquias sobre los cemente-

(83) 24 de febrero de 1932, "Instrucción pastoral acerca de los Cementerios y protesta razonada sobre la secularización de los mismos", BOE de Iuy, año 73, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 71-90.

rios parroquiales" en los que, a pesar de su título, se trataban diversas cuestiones tanto sobre estos cementerios como sobre los de religiosas o sobre enterramientos, si bien se hacía especial hincapié en el tema de la incautación de los parroquiales.

Comenzaban así estos "avisos" encargando a los parrocos que leyeran nuevamente la ley de 30 de enero, y especialmente el párrafo segundo de su artículo primero, "para el caso en que los Ayuntamientos quisieran incautarse de los cementerios parroquiales, como parece haberse intentado ya en alguna parroquia de nuestra diócesis"

Como regla general en estos casos habían de tener en cuenta, tal como determinaba todo el episcopado, "que por ahora"¹⁹ no han de consentir ninguna clase de incautación, pues esta ha de hacerse mediante expropiación con arreglo a ciertas bases que aun no se han establecido por el poder ejecutivo".

Y, sobre ello puntualizaba, para mayor claridad, dos concretos extremos, en el primero de los cuales invocaba una normativa que, tras la Constitución y la nueva ley, parece de dudosa vigencia y en el segundo introducía el caso, arraigado en la comunidad gallega, de los cementerios anejos a los templos y en los que, según el artículo tercero de la ley, estaba prohibida todo tipo de inhumación, razón suficiente para que fuera inviable la incautación, aunque en este caso no se desarrollara este fundamento:

"12. Que en casos de duda sobre la propiedad del cementerio, la presunción está por la propiedad de la Iglesia (R.O. de 28 de Abril de 1886), y es el Ayuntamiento quien ha de presentar las pruebas en contra.

«22. Que, ni con indemnización ni sin ella, han de consentir la expropiación del cementerio

parroquial, cuando este se encuentre dentro del atrio de la iglesia," y en este caso acudiran inmediatamente al Ordinario."

A estas disposiciones se añadiría la lógica advertencia de que, mientras el cementerio fuese parroquial, en ningún caso habría de consentirse el derribo de las tapías de separación con el cementerio civil, ya que la ley no otorgaba facultad alguna a los municipios para ello, llamándose también la atención de los encargados de parroquias sobre la posible pretensión de algún ayuntamiento no ya de incautar el cementerio parroquial sino de -considerándolos privados a tenor de lo establecido en la ley- pasar a intervenir directamente en su administración. En previsión de que tal hecho pudiera ocurrir se puntualizaba que

"Los cementerios parroquiales no son privados, por tanto no se les puede aplicar el apartado 2º del artículo 2º de la Ley mentada. Y ningún derecho pueden invocar los Ayuntamientos para intervenir en su administración."

Firmadas por el vicario general de la diócesis incluía el boletín eclesiástico de Astorga las ya aludidas "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de Cementerios", que abundaban en la exposición de la mera posibilidad de la incautación reconocida por la norma y en cómo tal incautación no podría realizarse hasta que las bases a que la ley aludía fueran dictadas, razón por la que las autoridades municipales no podrían exigir de los párrocos la entrega de las llaves de los cementerios propiedad de la Iglesia. Es de destacar que estos comentarios incluían uno específico sobre la frase de la ley relativa a que la in-

(85) En bastardilla en el original.

(86) s.f. "Avisos.- A los Encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales", BOE de Santiago de Compostela, año 71, 29 de febrero de 1932, núm. 2670, págs. 76-77.

cautacion no solo era una posibilidad sino que esta posibilidad únicamente se daría "en los casos en que así proceda", apuntando dos supuestos en los que claramente dicha posibilidad no podía darse: aquellos en que el cementerio estuviese anejo al templo, como había señalado ya el comentarista de Santiago de Compostela aunque ahora señalando la razón que fundamentaba la improcedencia de la incautación, y aquellos otros en que el cementerio parroquial no reuniera las condiciones físicas exigidas por las leyes.

"B) El segundo caso previsto en la ley y muy frecuente en la Diócesis es el de los pueblos en que no hay mas cementerio que el *parroquial*."⁷⁷

«En este caso, dice el artículo 12 que "los Municipios que por cualquier causa no tuviesen cementerio de su propiedad vendrán obligados a construirlo en el plazo prorrogable de un año". Pero añade: "Asimismo los municipios podrán *incautarse*" de los cementerios parroquiales... expropiando, en los casos en que así proceda."⁷⁸ el derecho que sobre ellos pueda acreditarse, con sujeción a las bases que se establezcan por el Poder ejecutivo".⁷⁹

«Como se ve, la facultad que se concede a los Municipios para incautarse de los cementerios parroquiales, en los casos en que así proceda, no es absoluta, sino que está condicionada y sujeta a las bases que en su día establezca el Poder ejecutivo.

«Por tanto, mientras el Poder ejecutivo no establezca estas bases no pueden los Municipios llevar a cabo la incautación, ni exigir que el párroco les entregue las llaves, ni destruir el muro que separa el cementerio católico del civil, ni obligar a que en aquel sea enterrado el que ha sido canónicamente privado de sepultura eclesialística ni impedir que se dé carácter religioso al enterramiento del que fallezca sin haber manifestado de manera expresa su voluntad, ni cambiar, en una palabra, el estado jurídico de dichos cementerios, que continúan siendo propiedad de la Iglesia, a la cual pertenecen su

(87) En bastardilla en el original.

custodia, administración, conservación y régimen.

«Es de notar que no se faculta a los Municipios para hacer la incautación siempre, sino solamente en los casos en que así proceda.»»

«No es fácil decir aquí cuando la incautación procede; pero, por vía de ejemplo, si puede afirmarse que *no* procede:»»

«a) Cuando el cementerio parroquial»» está enclavado en lugar anejo a la iglesia;»» porque esta incautación, por otra parte, sería inútil, ya que el artículo tercero de la ley prohíbe *expressis verbis*»» hacer inhumaciones en locales anejos a los templos,»» y

«b) Cuando el cementerio de la parroquia no reúne los requisitos de capacidad, distancia, orientación y condiciones geológicas del terreno, exigidos por las leyes vigentes para construcción de cementerios.»»»

En estas mismas ideas insistía el obispo de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, Dr. Fidel GARCÍA MARTÍNEZ, en su pastoral de 17 de marzo de 1932, en la que, aparte de señalar, al igual que en los "Avisos" publicados por el boletín de Santiago de Compostela, que los cementerios parroquiales no eran privados y, por tanto, no podía aplicarseles el mismo tratamiento, aludía a la imposibilidad de incautación mientras faltaran las correspondientes bases del Poder ejecutivo y a su improcedencia en el caso de cementerios anejos al templo, extremo sobre el que, en nota a pie de página, ponía de manifiesto, y era el primero en hacerlo, el posible error existente en la ley —cuestión esta a la que aludiremos al tratar de los cementerios privados— no sin antes emitir un duro juicio sobre la administración republicana :

(88) En bastardilla en el original.

(89) v. f., "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de Cementerios", BOE de Astorga, año 80, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 81-89.

"Esto es lo que lógicamente parece deducirse del análisis del texto de la ley, aun cuando ya estamos acostumbrados a que, en materias relacionadas con la Iglesia, la Administración dé luego interpretaciones más o menos arbitrarias. Como el art. 32 de la ley prohíbe las inhumaciones, salvo lo dispuesto en el art. 33^º (parece error material y que debe decir art. 29) en templos y locales anejos⁹⁰ a los mismos, cuando el cementerio parroquial sea un local anejo al templo, no podrá ser nunca expropiado para cementerio municipal."⁹¹

Sin entrar en el análisis de aquellos casos en los que, según el contenido de la ley, no debía proceder en absoluto la expropiación del cementerio parroquial, tal como habían hecho los obispos de Astorga y Calahorra, el resto del episcopado, bien directamente o a través de sus representantes, también dictó las pertinentes instrucciones en previsión de posibles incautaciones. En ellas, con mayor o menor énfasis y conteniendo o no una protesta por el hecho mismo de la existencia de la ley, se mantenía la línea de argumentación vista hasta ahora: la incautación debería realizarse en todo caso por medio de expropiación y esta no era posible mientras no existieran las bases a que la ley aludía; por tanto, los curas párrocos no debían entregar a las autoridades locales las llaves de los cementerios de su parroquia, a no ser por fuerza mayor y mediando la pertinente protesta o recurso ante cualquier caso de ingerencia municipal.⁹²

(90) En bastardilla en el original.

(91) 17 de marzo de 1932, "Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos", BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 22 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 49-58.

(92) Tal postura mantendrían, según los boletines eclesásticos consultados, el Dr. José VILA MARTÍNEZ, obispo de Gerona en su documento "Ley de secularización de cementerios" (BOE de Gerona, año 76, 29 de febrero de 1932, núm. 2, págs. 60-64); el obispo de Vich, Dr. Juan PERELLÓ Y POU, por medio de su vicario general ("Cementerios", BOE de Vich, año 78, 29 de febrero de 1932, núm. 2092); el arzobispo de Burgos, Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, por medio de su canónigo secretario ("Al clero parroquial.- De cementerios", BOE de Burgos, año 75, 29 de febrero de 1932, núm. 4, pág. 100); el arzobispo de Sevilla, Dr. Eustaquio

En la circular que el obispo de Salamanca, Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE, dirigió el 1 de marzo de 1932 al clero y fieles de la diócesis, y especialmente a los párrocos y economos o rectores de parroquias, tras formular su protesta por la promulgación de la ley y argumentar lo antijurídico de todo intento de incautación en base a las mismas razones expuestas por el resto de la jerarquía, añadía unas consideraciones tanto de carácter económico como legal -en base a la misma normativa ya apuntada por la diócesis de Santiago de Compostela- sobre el derecho de propiedad de la Iglesia en los cementerios parroquiales, en previsión de la problemática que pudiera plantearse en los actos de expropiación:

"Nada prueban contra el derecho de propiedad de la Iglesia sobre sus cementerios parroquiales algunas concesiones hechas a los Ayuntamientos para percibo de derechos de sepulturas especiales; cuyas concesiones suelen ser en compensación de gastos con que ellos contribuyeron a la conservación, reparación o ampliación de los mismos cementerios. De igual modo, no prueban tales gastos el derecho de propiedad que preten-

ILUNDAIN ESTEBAN ("Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles", BOE de Sevilla, año 75, 7 de marzo de 1932, núm.1201, págs. 92-97, documento que, como ya hemos indicado, hizo suyo el obispo de Tenerife, Fr. Albino GONZÁLEZ MENÉNDEZ-REIGADA (BOE de Tenerife, marzo y abril de 1932, núms. 3 y 4, págs. 37-44); el obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Leopoldo ELJO GARAY, a través de su penitenciario-secretario ("Disposiciones sobre la Ley de cementerios", BOE de Madrid-Alcalá, año 47, 15 de marzo de 1932, núm. 1555, págs. 112-114); el obispo de Segovia, Dr. Luciano PÉREZ PLATERO ("Sobre la secularización de cementerios", BOE de Segovia, año 77, 13 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 109-115); el obispo de Oñhuela, Dr. Francisco Javier IRASTORZA LOINAZ ("Circular sobre cementerios y enterramientos", BOE de Oñhuela, año 51, 15 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 119-123); el obispo de Zamora, Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA ("Circular sobre la ley de secularización de cementerios", BOE de Zamora, año 69, 15 de marzo de 1932, núm.3, págs. 70-75); el obispo de Tarazona, Dr. Isidro GOMA y TOMAS ("El laicismo póstumo.- Instrucción pastoral sobre cementerios y sepulturas", BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 707, págs. 207-239) o el obispo de Vitoria, Dr. Manuel MUGICA URRESTARAZU ("Sobre cementerios", BOE de Vitoria, año 68, 1 de abril de 1932, núm.8, págs. 219-221, "Sección de consultas.- Sobre cementerios y sepulturas", BOE de Vitoria, año 68, 15 de abril de 1932, núm.9, págs. 241-243 y "Sobre incautación de cementerios parroquiales", BOE de Vitoria, año 68, 15 de junio de 1932, núm. 13, págs. 325-327), algunos de cuyos documentos ya hemos analizado.

dieren alegar algunos Ayuntamientos sobre los cementerios de las parroquias en todos aquellos casos en que, por atención a dichos gastos, se concedió que sea gratis el enterramiento general. En todo caso, en España la presunción jurídica está por la propiedad de la Iglesia (R.O. 28 Abril 1886), y corresponderá al Ayuntamiento la prueba contra ella."'''

En la misma línea de argumentación seguida por el obispo de Salamanca, también la circular del provisorato de Oviedo de 15 de marzo de 1932 hablaba del derecho de propiedad de la Iglesia, indicando claramente que era a la autoridad municipal a quien incumbía demostrar cualquier derecho que pretendiera sobre los cementerios parroquiales. La circular detallaba los títulos jurídicos -aparte de la posesión pacífica- en que solía fundarse el derecho de la Iglesia a la posesión de tales cementerios y aludía a la presunción legal a favor de ella, recomendando a los párrocos la pertinente investigación sobre los títulos enumerados:

"Por lo tanto mientras no se establezcan las bases de referencia y con arreglo a ellas se realice la debida expropiación, la Iglesia continua en la pacífica posesión de la propiedad, custodia y administración de los cementerios parroquiales, y el municipio que pretenda algun derecho sobre ellos (como no sean los que le concedian las leyes sanitarias y otras similares que de acuerdo con la Iglesia venia ejerciendo hasta ahora) tendrá que demostrarlo, lo mismo que si se tratara de cualquier otro objeto de dominio.

«El hecho de la posesión pacífica de los diversos cementerios parroquiales, suficiente ya de suyo para continuar en el ejercicio del derecho, suele fundarse en otros títulos jurídicos, siendo los más frecuentes:

(93) 1 de marzo de 1932, "Circular del prelado.- Sobre la Ley secularizadora de Cementerios", BOE de Salamanca, año 79, 1 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 62-66,

"12. El que la construcción del cementerio se hiciera: a) Con fondos del culto y fábrica. b) En terrenos de la Iglesia. c) Con fondos de culto y fábrica auxiliados con limosnas y aportaciones de los fieles. d) Bajo la iniciativa del parroco auxiliado por los religiosos, bien aisladamente, bien representados en junta parroquial de vecinos. e) Con donaciones expresas de los fieles hechas "inter vivos o mortis causa.

"22 El que por un largo espacio de tiempo la Iglesia viniera poseyéndolo, custodiándolo y administrándolo sin reclamación judicial alguna, especialmente si durante ese tiempo vendió alguna sepultura perpetua, nicho, etc. Es de advertir que en caso de duda la presunción legal está a favor de la Iglesia.

"En previsión de que en fecha más o menos próxima puedan dictarse las aludidas disposiciones encaminadas a la expropiación de los cementerios parroquiales, conviene que los parrocos revisen cuidadosamente los mencionados títulos jurídicos, bien por los datos existentes en el archivo, bien por información de vecinos o de cualquier otra forma fehaciente."

Tal como había hecho el episcopado de Oviedo, también en las "Breves acotaciones a la ley de secularización de cementerios" publicadas por el boletín eclesiástico de la archidiócesis de Tarragona, y tras la reiterada alusión a que sin las bases de que trataba la ley no cabía expropiación, se exhortaba a los parrocos a que reunieran los datos que pudieran ser alegados para probar -y aquí parece que el redactor divergía de la postura sustentada por las diócesis vistas en cuanto a la carga de la prueba, aunque no entraba en tal cuestión- el derecho de propiedad de la Iglesia:

"Entre tanto conviene que los Rdos. Parrocos consulten sus archivos y reunan todos los antecedentes y datos que puedan aducirse para probar el derecho de la Iglesia, al objeto de acreditarlo en momento oportuno. Procuren tener a

(94) 15 de marzo de 1932, "Circular del provisorato.- Sobre cementerios", BOE de Oviedo, año 89, 15 de marzo de 1932, núm. 6, págs. 70-72.

mano el historial del cementerio, su funcionamiento, reglamento por el que se rige, inventario, etc.

«Téngase en cuenta que de los cementerios anteriores a mediados del siglo XIX son contados los que en esta Archidiócesis no tengan el carácter exclusivamente parroquial, habiendo ejercido la Iglesia plenamente en los mismos su derecho de propiedad y jurisdicción.

«De los construidos con posterioridad, algunos son municipales, otros parroquiales, y otros mixtos, por haber contribuido de común acuerdo a sus expensas proporcionalmente al Municipio y la Parroquia. En los parroquiales a veces ha cuidado de su administración tan solo el párroco, y cuando para su régimen se ha constituido una Junta, la presidencia de ordinario se ha reservado al párroco y la vicepresidencia al alcalde. En los otros, generalmente es el presidente de la Junta el alcalde y se ha designado como vicepresidente el párroco. Sobre todos ellos tiene jurisdicción la Iglesia por su carácter sagrado, adquirido al recibir la bendición litúrgica.» «»»

Mas era el obispo de León el que en sus "Acotaciones a la Ley de cementerios" hacia la enumeración más prolija de los datos y antecedentes que deberían reunir los párrocos para probar en su día el derecho de propiedad de la Iglesia sobre sus cementerios y, así, tras puntualizar que la ley no daba carta blanca a los ayuntamientos, sino que tan solo aludía a la posibilidad de estos de incautar los parroquiales y siempre mediando la expropiación y con sujeción a unas bases que aun no habían sido dictadas, puntualizaba:

"Procede que los Rvdos. Sres. Curas reúnan todos los antecedentes y datos para que, con ellos a la vista, formen el historial del Cementerio de su

parroquia, y ver así los hechos y fundamentos que, en su día, pueden aducirse para probar el derecho de la Iglesia, o justificar que el Cementerio es parroquial. Son datos importantes para esto, entre otros, los siguientes: 1º. Ver si en el libro de fábrica hay asientos de cantidades destinadas a la construcción, ampliación, reparación o conservación del cementerio; para esto averiguarán primeramente, hacia que año fue construido el cementerio y con este dato pueden ver las cuentas del anterior y siguientes e ir tomando nota de las partidas que hallaren. 2º. Solar en que se construyó, si fue de algún templo, ermita, perteneció a la Iglesia, o fue cedido a esta, o si el cementerio se halla en lugar anejo (unido o agregado) al templo, pues en este caso no procedera la incautación, porque, según el artículo 3º de la ley, "en ningún caso será permitida la inhumación en los locales anejos a los templos". 3º. Si en el existen sepulturas perpetuas y caso afirmativo si fueron concedidas por la autoridad eclesiástica. 4º. Las actas de bendición de los Cementerios en las que se acostumbra a consignar datos relativos a su origen y procedencia. 5º. Si es administrado por el párroco solamente, y el es quien viene cuidando de la conservación, limpieza y del señalamiento de las sepulturas. 6º. Si, caso de tener una sola llave, se halla en poder del párroco. 7º. Si la fábrica de la Iglesia viene percibiendo alguna cantidad de los enterramientos o inhumaciones en el Cementerio. 8º. Todos los demás actos de posesión que el párroco ha ejercido y ejerza, en nombre de la Iglesia, en el Cementerio, le dan derecho a ser respetado en ella (C.C. 446) y tiene además a su favor la presunción legal de que posee con justo título y no se le puede obligar a exhibirlo (C.C. 448).

«Por regla general, salvo rarísima excepción, todos los Cementerios cuya construcción es anterior a mediados del siglo XIX son parroquiales, y también lo son casi la mayoría de los que datan desde la citada fecha. Las donaciones o prestaciones que los fieles de la parroquia hayan hecho para la construcción o conservación del Cementerio no son argumentos en contra, como no lo son las hechas a los templos, contra el derecho de la Iglesia sobre los mismos: aparte de que solo representarían una pequeña compensación a la Iglesia no exigiendo, por regla general, tasa alguna por las inhumaciones.

«34. CEMENTERIOS MIXTOS.- Son los que han sido contruuidos por la Iglesia y por el Municipio, siendo administrados por la autoridad eclesiástica y civil. Para la incautación en la parte que afecta al derecho de la Iglesia, rigen los mismos principios que para los cementerios parroquiales.»»»

Llegados a este punto, y como ejemplo de la distinta interpretación que por parte del episcopado se dió a la ley de secularización de cementerios, hemos de destacar que así como en todos los boletines oficiales eclesiásticos comentados hasta ahora -ya fuera en un documento procedente de la propia pluma del prelado, ya de algún cargo de la curia- se negaba toda posibilidad de incautación de los cementerios parroquiales hasta que las bases para la correspondiente expropiación hubieran sido dictadas por el poder ejecutivo, el obispo de Avila, Dr. Enrique PLA Y DENIEL, en la circular que dictó el 5 de marzo de 1932 dando instrucciones sobre cementerios y enterramientos, no ayudó en absoluto a dichas bases, indicando, incluso, la posibilidad de que los ayuntamientos incautaran mediante la correspondiente expropiación y poniendo en guardia a los párrocos únicamente sobre el hecho de la posible incautación sin mediar la previa expropiación, ante lo que siempre deberían elevar la correspondiente protesta sobre el derecho de la Iglesia.

"Aun cuando la nueva Ley civil establece que los Municipios podrán incautarse de los cementerios parroquiales, como concede esta facultad mediante expropiación, sin ella se opondrán los señores párrocos a que la incautación se realice; y si propusiesen indemnización antes de entregar el cementerio lo pondrán inmediatamente en nuestro conocimiento. Si a pesar de la oposición de los párrocos, los Municipios llevasen a efecto violentamente la incautación sin indemnización

(96) s.f., "Anotaciones a la Ley de cementerios", BOE de León, 31 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 112-118.

protestaran de esta indebida incautación en el acto de realizarse, fundandose en el artículo 19 de la citada Ley y Nos avisaran enseguida de haberlo así practicado. Aun en el caso de incautarse previa expropiación forzosa siempre deberá hacerse constar la protesta de la lesión de los derechos de la Iglesia a conservar sus cementerios." (97)

Sin embargo, esta argumentación del obispo de Avila era, como hemos visto, una excepción en la línea seguida por la mayoría de los prelados, que defendían la improcedencia de todo acto de expropiación previo a la existencia de las bases que habria de dictar el poder ejecutivo, por lo que, a la vista, probablemente, de las normas dadas por sus hermanos en el episcopado, el Dr. PLA Y DEMIEL modificaria sus instrucciones en la "Circular sobre la incautación de cementerios parroquiales" de 30 de julio de 1932, circularen la que ya pondria como condición "sine qua non" para la expropiación el requisito previo de la publicación de las bases a que la ley aludia, aunque manteniendo, sin embargo, como punto central de la oposición a la incautación de los cementerios parroquiales por parte de la autoridad municipal, no la existencia o inexistencia de las mencionadas bases -lo cual parece indicar que la alusión a ellas en esta circular era mas un intento de no separarse de la postura mantenida por los demás miembros de la jerarquía que una modificación de su pensamiento inicial- sino, tal como habia hecho en la circular de 5 de marzo, la de la expropiación o indemnización previa, en base a lo cual detallaba las vías a utilizar por los párrocos en el caso de que no mediara esta:

"Al promulgarse la ley sobre cementerios y enterramientos de 30 de enero ultimo dimos a los párrocos con fecha 5 de marzo del corriente año las instrucciones oportunas tanto sobre los enterramientos como sobre los cementerios de dis-

(97) 5 de marzo de 1932, BOE de Ávila, año 43, 11 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 97-102.

tintas clases y de una manera especial sobre la manera como debían portarse los párrocos en el caso de acordar algunos ayuntamientos la incautación de cementerios parroquiales.

«Confirmando cuanto allí dispusimos, ordenamos además que siempre que un Ayuntamiento acuerde la incautación de un cementerio parroquial antes de que se publiquen por el Poder ejecutivo las bases que en el artículo primero de (la) citada ley se anuncian para regular la expropiación de los cementerios parroquiales y se pretenda hacer la incautación antes de la expropiación o indemnización, los Párrocos, amparándose en el artículo 267 del Estatuto municipal de 8 de marzo de 1924 pidan al Ayuntamiento *dentro de los ocho días siguientes a la notificación que se les haya hecho del acuerdo*» la revocación del mismo, basándose en que según la ley de 30 de enero la incautación de los cementerios parroquiales ha de ser en todo caso con expropiación y la ley vigente de expropiación forzosa de 10 de enero de 1879 exige que la adecuada indemnización sea entregada antes de tomar posesión de lo expropiado.

«Casos ha habido en que los Ayuntamientos han revocado su acuerdo; pero aun ante la probabilidad de que no quieran revocar el acuerdo de incautación, conviene no omitir la petición de revocación, para tener más expedita la demanda al Juzgado cuando se crea oportuno acudir al mismo para la reivindicación del derecho.»⁽⁹⁸⁾

(98) En bastardilla en el original.

(99) 30 de julio de 1932, "Circular sobre la incautación de cementerios parroquiales", BOE de Avila, año 43, 30 de julio de 1932, núm. 7, págs. 321-322. Esta circular sería hecha suya por el vicario general de Granada ("Circular sobre la incautación de cementerios", BDE de Granada, 31 de agosto de 1932, núm. 3508, págs. 227-228)

3.2.1. El poder civil.

Mas, pese a esta serie de protestas y escritos -cuya mayoría tuvo lugar en los meses de marzo y abril de 1932- la expropiación de los cementerios parroquiales se realizó en muchos municipios sin que fueran dictadas las bases legales que la ampararan, y no solo ella sino también la incautación pura y simple, sin indemnización previa.

Así ocurriría con el cementerio de la ciudad de Salamanca, propiedad del seminario de aquella diócesis -que con los ingresos derivados de su administración debía sufragar los estudios de los seminaristas mas menesterosos- efectuada en junio de 1932, acto que motivó que el Dr. Francios FRUTOS VALIENTE escribiera una dolorida pastoral en protesta por tal atropello, tanto mas aflictiva cuanto que se hallaba bajo los inmediatos efectos de una notificación recién llegada anunciando la inminente incautación.

"Escribimos estas líneas en las horas mas amargas de Nuestro pontificado salmantino, en las mismas en que tememos se está consumando lo que estimamos una infracción de la Ley de 30 de Enero del corriente año, un desprecio perfecto de los sagrados derechos de la Iglesia y de la Diócesis, una verdadera "expropiación" -que a tanto equivale el incautarse sin expropiar previamente y sin indemnizar de antemano- de la propiedad de Nuestro Seminario Pontificio, y una consiguiente crueldad con numerosos seminaristas pobres, a quienes de momento no podremos alimentar y sufragar sus estudios. Nos referimos a la incautación del Cementerio de Salamanca, propio del Seminario, que lo adquirió con su dinero."

Este acto, continuaba diciendo el prelado, no había sido detenido ni con el recursos planteado ante el propio Ayuntamiento contra el acuerdo de incautación ni con el elevado ante el Tribunal provincial (que, por estar sin

resolver dejaba expedita, por el momento, la vía iniciada por la corporación). Tampoco lo había detenido las penas de excomunión en que incurrian los realizadores del expolio.

"Protestamos ante el Cielo y la faz de la Diócesis entera y de todos los hombres de buena voluntad de la injusticia varia que se perpetra. Ni razonamientos, ni recursos de reposición planteados por Nós, ni siquiera la consideración de que, planteado a estas horas otro recurso contencioso administrativo por Nós ante el Tribunal provincial, el asunto está *sub iudice*, ni tampoco el saber que los miembros del Municipio, realizadores de la incautación, están *ipso facto* por los sagrados cánones incursos en excomunión: Nada, nada ha servido para que se evitase el atropello. Hace una hora, no más, que al regresar de cumplir los deberes Nuestros a este Palacio, Nos hallamos con la notificación y el aviso de incautación, traído *dos horas antes de la en que el Ayuntamiento de Salamanca se apodera bajo su responsabilidad y contra toda Nuestra voluntad del Cementerio.*" (100)

Ante esta actuación municipal el obispo deseaba la reparación y el arrepentimiento, mientras no dejaba de recomendar a sus feligreses, con un ejemplo de cristiana actitud, que siguieran manteniendo el debido respeto a las autoridades, pese a sus hechos, todo ello en espera de la resolución judicial del recurso, única vía a la que consideraba legítimo acudir.

"A los que Nos han afligido esta amarga pena deseamos de todo corazón que se arrepientan y reparen el daño: el espiritual sobre todo, que hubieren producido. A quienes nos acompañan en la pena y la protesta, Nuestra rendida gratitud Pastoral, y el ruego siempre y hasta con peligro de desagradarles reiterado por Nós, de que nunca demuestren su amor a la Iglesia sin simultanearlo con un absoluto respeto para las personas, lo mismo físicas que morales y jurídicas, por opuestas que ellas fueren. Cuando Nós aconsejamos que se defienda siempre lo que se estime de derecho y de justicia por vías legales y sólo por

ellas, no hacemos sino obedecer las altísimas intimaciones del Papa.

«Esperamos serenamente la resolución del Tribunal, de quien ahora depende la resolución de Nuestro recurso.»⁽¹⁰¹⁾

Como colofón de este hecho queremos apuntar que el número siguiente del boletín eclesiástico salmantino publicaría una nota titulada "El 'Affaire Cementerio'" en su "Crónica diocesana" en la que, tras comentar la actitud mantenida por la autoridad municipal, daba la noticia de que, a pesar de que el Tribunal provincial de lo contencioso-administrativo había dictado resolución suspendiendo el acuerdo municipal de la incautación, el ayuntamiento había procedido, no obstante, al derribo de las tapias de separación de los recintos católico y civil.⁽¹⁰²⁾

Vemos, pues, como el ansia expoliadora de los municipios no quedaba circunscrita a núcleos urbanos de escasa relevancia, sino que las mismas incautaciones se realizaron en las capitales de provincia y, así, tenemos también el ejemplo de Gerona, mucho más temprano aun que el

(101) Junio de 1932, "Nuestra protesta y nuestro dolor", BDE de Salamanca, año 79, 1 de julio de 1932, núm. 7, págs. 171-173.

(102) "Recordarán los lectores de este Boletín Oficial del Obispado la protesta que en el último número formulaba el Excmo. Prelado contra la incautación por el Ayuntamiento de Salamanca del Cementerio de esta Ciudad, que es, hoy como entonces y como antes del injusto y desdichado acuerdo, propiedad del Seminario Diocesano,

La incautación, como suponía en su mencionado escrito el Señor Obispo, llevóse a efecto el día primero de Julio, no sin que la representación del Prelado consignase en Acta notarial que el acto se realizaba contra toda la voluntad del mismo y que éste protestaba con máxima energía y declaraba incurso en excomunión a los incautadores. No obstante, lo cual, el Presidente del Municipio Salmantino daba en nota oficiosa, después, las gracias a todos, inclusive (!!) a la Autoridad eclesiástica y se felicitaba de no haber hallado

salmantino pues ya en febrero de 1932 el alcalde de aquella ciudad había pedido al obispo Dr. José VILA Y MARTÍNEZ las llaves del cementerio parroquial, sin embargo el obispo, consultada la Junta del cementerio, de la que era presidente, nego su entrega basándose en que la ley: primero: otorgaba facultades al municipio, pero no al alcalde que, por tanto, no podía actuar sin el previo acuerdo municipal; segundo: hablaba de cementerios enclavados en el municipio respectivo y se daba el caso de que el de Gerona pertenecía al término de San Daniel, y

obstáculo alguno para la incautación perpetrada. En verdad que no acudieron a impedirla "los zuevos pontificios", a pesar de ser el Papa el supremo propietario del Cementerio y de todos los bienes eclesiásticos.

Dictó a los pocos días el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo, resolución suspensiva del acuerdo municipal de incautarse. Aunque la sentencia no era firme, parecía del más elemental respeto que los incautadores se abstuviesen de otros actos, siquiera mientras el asunto principal recurrido permaneciese "sub iudice". No fue así. Por el contrario, procedióse una tarde, cuya fecha ni evocar queremos, al derribo de la tapia que separaba los enterramientos eclesiásticos de los civiles, y por si ello era poco, sumándose unas a otras las profanaciones, el Presidente del Ayuntamiento de Salamanca, representante de la Ciudad de las Catedrales y de la Escuela celeberrima, de esta Ciudad catolicísima donde envolvieron al mundo con ilusas de genio y santidad los Vitoria, Báñez, Fr. Luis de León, Melchor Cano, San Juan de la Cruz y Santa Teresa la inmensa, actuó en aquella triste tarde de "cura laico de la Religión de la Humanidad!" y aún bendijo con nuevas e insospechables bendiciones...

Claro es que, pese a todas las protestas que se esfuerzan en reiterar los incautadores sobre la situación jurídica en que dicen estar, hasta ahora no hay otro derecho que el de la Diócesis y su Seminario diocesano, y una violación de ese derecho, que si la fuerza hace posible no es poderosa a fecundarlo para el nacimiento de otro derecho legítimo. Pero de esto los Tribunales dirán, y luego... Dios, cuya es siempre la última palabra y la sanción inapelable."

(s.f. "El 'Affaire' Cementerio".-BOE de Salamanca, año 79, 1 de agosto de 1932, núm. 8, págs. 208-209.)

El carácter favorable a los derechos de la Iglesia de la sentencia dictada el 15 de julio por el Tribunal contencioso-administrativo provincial, no dejaba, en efecto, lugar a dudas: "Se decreta la suspensión de la ejecución del acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, de fecha 20 de junio último, referente a la incautación del cementerio católico de la Aisna, debiendo en su consecuencia cesar, luego que esta resolución sea firme, en el auto de dominio y administración sobre el mismo, devolviéndole con los efectos, libros y demás incautados a la Administración diocesana..." ("El Debate", 17 de julio de 1932).

tercero: la incautación debería estar precedida de la correspondiente expropiación efectuada según las bases aun no dictadas por el poder ejecutivo. Por tales razones pedía el retraso de la incautación y que, en todo caso, la misma no se realizara hasta que por la autoridad se hubiera determinado a cual de los dos municipios correspondía el cementerio. Comunicado este escrito al gobernador civil este determinaría que, dado que el cementerio parroquial hacia las veces de general de Gerona, correspondía a este municipio la incautación, sin perjuicio de que, más adelante, pudiera el de San Daniel alegar sus derechos. Por ello el alcalde ratificó su decisión y, por conservar las buenas relaciones existentes entre las autoridades civiles y eclesiásticas, le fueron entregadas las llaves el día 16 de febrero, señalando que se hacia para cumplir las órdenes recibidas y sin renunciar a la reclamación oportuna.⁽¹⁰³⁾

Pero así como hemos señalado que, si bien la línea general de argumentación del obispado era la total negativa a la posibilidad de incautación mientras no existieran las tantas veces citadas bases, hubo obispos que no mantuvieron tal postura, también en el plano de la autoridad civil no se dió una actuación unívoca respecto a este tema y sí, como acabamos de anotar, el gobernador civil de Gerona señaló la posibilidad de incautación, otros gobernadores manifestaron la improcedencia de esta, siguiendo la misma postura mantenida por la generalidad del episcopado.

Atención especial merece la solución dada por el gobernador civil de Zamora, el cual, previamente a la adopción de cualquier postura, elevó la correspondiente

(103) *Església i Estat durant la segona...*, II, pág. 584, nota 43.

consulta a la Dirección General de Administración. Paradójicamente, la interpretación dada a la ley por esta esfera del poder central en 27 de febrero -diametralmente opuesta a la general mantenida por el episcopado, por cuanto admitía la procedencia de la incautación de los cementerios parroquiales por las autoridades locales sin necesidad de aguardar a la publicación de las bases que debían regularla- no informó, como hubiera sido lo lógico, el criterio de las distintas autoridades provinciales, las cuales, a similitud del episcopado, adoptaron en su respectiva demarcación su personal criterio:

"El Ilmo. Sr. Director general de Administración, en contestación a consulta que le fue formulada, comunica a este Gobierno con fecha 27 de Febrero pasado, lo siguiente:

«Visto el oficio de ese Gobierno de 20 del actual transcribiendo la consulta que formula el Alcalde de Pozuelo de Tabara relativa a que si cuando el cura regente de la Parroquia se oponga a ceder al municipio el derecho eclesiástico del unico cementerio del pueblo, se ha de aguardar para la incautación a que el Poder Ejecutivo establezca las bases a tal fin, o si puede desde luego expropiar tal derecho y declararlo comun a todas las creencias; esta Dirección general ha acordado evacuar la referida consulta en el sentido de que puede y debe desde luego la autoridad local incautarse del cementerio, sin inconveniente de que cuando se dicten las bases aludidas el Ayuntamiento, en tal instante, proceda en consonancia con lo que en ellas se disponga.

«Se publica para que sirva de norma general en aquellos casos que puedan suscitarse en los Ayuntamientos de esta provincia.

«Zamora 2 de Marzo de 1932.- El Gobernador, Mariano Quintanilla. "(104)"

(104) BOE de Zamora, año 69, 15 de marzo de 1932, núm. 3, pág. 74.- Reproducido del boletín oficial de la provincia. Precisamente la inclusión en este número del boletín eclesiástico de la circular del gobernador transcrita respondía a una reclamación efectuada ante él por el propio obispo y que este mismo ejemplar insertaba en el conjunto de una circular del prelado que comprendía el texto

Como ya hemos indicado al hablar de la demolición de las tapias de separación entre los cementerios católico y civil, pese a las instrucciones emanadas de la Administración Central, un gobernador civil de una provincia contigua, la de León, en circular de 4 de marzo de 1932, mantendría la no procedencia de la incautación hasta que fueran dictadas las normas a que la ley se refería.

"Con motivo de la aplicación de la Ley de 30 de enero del corriente año, que hace referencia al régimen de Cementerios, vienen elevándose a este Gobierno reclamaciones por parte de los señores Alcaldes y Curas párrocos sobre la forma de incautarse los Ayuntamientos de los Cementerios parroquiales. Se recuerda a todos los señores Alcaldes que, conforme dispone la Ley de referencia, los Municipios para incautarse de dichos Cementerios o de aquellos otros que de hecho presten el servicio de Cementerio general dentro del término municipal respectivo, deberán atenerse a las normas que se establecieron en su día por el Poder ejecutivo.

de la ley de secularización de cementerios con su queja por su promulgación y una serie de instrucciones a sus párrocos ante ella. Dicha reclamación había sido motivada por la notificación cursada al párroco de S. Vitero por el alcalde de dicha localidad pidiendo la entrega de las llaves del cementerio parroquial y en ella opinaba el Dr. ARCE que la actitud del alcalde implicaba una "extralimitación de poder" toda vez que no podía pretender incautarse del cementerio parroquial mientras no se dictaran las bases anunciadas por la ley. Aunque, como indicaba el obispo, a la hora de escribir su circular no había recibido la contestación del gobernador y, pese a manifestar la esperanza de que el contenido de la instrucción de la Dirección General de Administración no pudiera aplicarse al caso expuesto, no dejaba de reproducirla indicando, además, en sus advertencias a los párrocos que los cementerios parroquiales o los mixtos deberían ser expropiados con arreglo a las bases que se establecieran por el poder ejecutivo, más como éstas aún no habían sido dictadas "no puede verificarse hoy la expropiación, según queda demostrado en la *Reclamación* arriba transcrita." No obstante estas palabras y a la vista de la postura de la Administración Central no dejaba de añadir en previsión de acontecimientos: "En su virtud, los Párrocos que se viesen precisados a entregar a la autoridad local la llave del cementerio, consignarán ante testigos la reserva de los derechos de la Iglesia y recurrirán a Nos exponiendo con todo detalle las circunstancias del despojo." (Ibid, págs. 70-73 y 75.)

«Lo que se publica en este periódico oficial para general conocimiento.- Leon, 4 de marzo de 1932.- El Gobernador civil, Juan Donoso-Cortés.»⁽¹⁰⁵⁾

Y en esta misma línea se manifestaría también el gobernador civil de Soria en su circular de 19 de abril de 1932, en la que señalaba que los ayuntamientos no podían incautarse de los cementerios parroquiales hasta que no se hubiesen publicado las bases que debían regular la expropiación.⁽¹⁰⁶⁾

Pero incluso estas directrices de las autoridades provinciales, que deberían haber servido al menos, y pese a la disparidad de criterio existente entre ellas, para que por las autoridades locales de cada provincia se siguiera una línea uniforme de actuación, tampoco fueron en algunos casos suficientes, pues aun cabía descender a la distinta interpretación que por tales autoridades locales pudiera darse a las mismas. De forma que, como hemos visto, se pudieron mantener diferentes criterios entre la Administración central, la provincial y la local. Criterios que, en muchas ocasiones, debieron también influir -o ser influidos por ellas, en recíprocas actitudes-, en las distintas posturas que hemos visto reflejadas en la jerarquía. Ejemplo de lo que antecede fue denunciado por el boletín eclesiástico de la diócesis de Barcelona, en cuya provincia, según se desprende de lo en el manifestado, algu-

(105) Reproducida entre otros, en los boletines eclesiásticos de Astorga (año 80, 15 de marzo de 1932, núm. 6, Pág. 112), Farazona y Tudela (año 70, 30 de abril de 1932, núm. 706, págs. 312-313), Barcelona (año 75, 31 de octubre de 1932, núm. 2, págs. 430-431), Gerona (año 76, 28 de noviembre de 1932, núm. 13, págs. 336-337) y Oristuela (año 52, 1 de febrero de 1933, núm. 3, pag. 35).

(106) Reproducida en los boletines eclesiásticos de Barcelona (año 75, 31 de octubre de 1932, núm. 20, págs. 430-431), Gerona (año 76, 28 de noviembre de 1932, núm. 13, pag. 336), Mondoñedo (año 75, 4 de diciembre de 1932, núm. 23, pag. 216) y Oristuela (año 52, 1 de febrero de 1933, núm. 3, pag. 35).

nos alcaldes habian tomado como pretexto para proceder a la incautacion del cementerio una circular del Gobernador civil en la que, al parecer, no cabia apoyar tal facultad.

"Habiendo llegado a nuestro conocimiento que algunos señores Alcaldes de esta Provincia, alegan, con motivo de la incautacion del Cementerio parroquial, una Circular del Excelentísimo Sr. Gobernador civil, expedida con fecha 24 del próximo pasado febrero, debemos manifestar que en ella no se lee palabra alguna que permita u ordene semejante atropello; pues en esta Circular, el Excmo. Sr. Gobernador, con el celo que le distingue en procurar la observancia de las leyes, ordena tan solo que "todos los ciudadanos, así como los tribunales y Autoridades, hagan cumplir esta ley sin apartarse de sus normas"; que "los Ayuntamientos preparen lo necesario para la construccion de cementerios de su propiedad, cuando no los tuvieran, dentro del plazo que la ley determina"; que los Alcaldes informen "si el cementerio de la población es municipal o parroquial, y si existen uno o varios de cada clase; los cementerios que existan en el termino municipal, si existe cementerio civil contiguo al concesional" (*Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona*, num. 48)".

Extremo opuesto a esta actitud de los ediles municipales y ejemplo de la reconsideracion de los propios acuerdos de los ayuntamientos lo tenemos en la revocacion efectuada por un municipio de Santander y que fue difundida por los distintos boletines eclesiasticos a fin de que los parrocos tomaran ejemplo de las posibles acciones a emprender, difusión que, al igual que la de las sentencias favorables a la Iglesia, a las que seguidamente aludiremos, nos da idea de cómo ésta derendió sus derechos y luchó contra todo intento de incautacion, divulgando tales hechos entre todo el clero por medio de sus organos oficiales de difusión.

(197) 8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", BDE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120.

Así, los boletines eclesiasticos de Avila, Pamplona, Tarazona y Tudela, Granada, Orihuela, Barcelona, Sevilla, Madrid-Alcala y Gerona, entre los consultados, reproducian el recurso presentado por los parrocos de Coa, Barros, San Mateo y Los Corrales de Buelna, en la provincia de Santander, ante el acuerdo municipal de incautacion del cementerio. Dicho recurso, fundado en la inexistencia de las bases para la expropiacion, fue admitido a tramite por la corporacion, de forma que "el Ayuntamiento tomo en consideracion este recurso y, visto el parecer de los Abogados con quienes consultaron *revocaron el acuerdo*",⁽¹⁰⁸⁾ segun se nos notifica con fecha 4 del presente mes, en virtud del cual se retiro la demanda presentada en el Juzgado de Primera Instancia contra el Alcalde y Corporacion Municipal". A esta resena añadian los boletines que el mismo parroco de Los Corrales de Buelna señalaba que este hecho deberia tenerse presente por todos los sacerdotes, que no debian consentir que se despojara a la Iglesia de la propiedad de sus cementerios.⁽¹⁰⁹⁾

Este mismo ambiente de confusion en la interpretacion de la ley de cementerios era tambien detectable en el ambito del poder judicial, aunque solo tenemos constancia de las sentencias que fueron publicadas en los boletines eclesiasticos que, como hemos indicado, logicamente, difundian las posturas que fueran favorables a los intereses de la Iglesia.

De esta forma vemos, por ejemplo, que el juzgado de primera instancia de Soria, por sentencia de 23 de marzo de 1932, revocaba otra anterior del juzgado municipal de Cabueñas del Pinar, declarando que el parroco no estaba

(108) En bastardilla en el original.

(109) Boletines eclesiásticos de Avila (año 43, 30 de julio de 1932, núm. 7, págs. 353-355) Pamplona (año 71, 1 de agosto de 1932, núm. 1738, págs. 230-231) Tarazona y Tudela (año 70, 15 de agosto de 1932, núm. 713, págs. 537-542)

obligado a acceder a la pretension del alcalde de aquel término de que le entregara las llaves del cementerio hasta que por el poder ejecutivo se establecieran las bases anunciadas en el artículo primero de la ley, decisión que probablemente influyó en la circular del gobernador civil de la provincia a que antes nos hemos referido. (100)

Esta sentencia, dictada como consecuencia de la denuncia interpuesta por el párroco del término municipal citado no era, desde luego, la única favorable a la Iglesia y, así, los boletines eclesiásticos de Oviedo, Toledo, Barcelona, Madrid-Alcalá, Pamplona, Astorga, Tarazona y Tudela, Zaragoza y Segovia reproducirían en sus números de octubre a diciembre de 1932 la sentencia de la Audiencia de Oviedo fallada contra el Juez de Instrucción de Avilés y en la que se señalaba que por este debía admitirse y conocer el interdicto planteado por el párroco de San Martín de Laspra contra la incautación del cementerio parroquial efectuada por el ayuntamiento de Castrillón el 26 de abril de 1932, según acuerdo municipal del día ocho del mismo mes. (101) Resuelta la apelación por dicho Juez en sentido contrario a la Iglesia fue nuevamente recurrida ante la Audiencia provincial de Oviedo, que falló ordenando que se repusiera en la posesión del cementerio a la parroquia de San Martín

Granada (año 87, 31 de agosto de 1932, núm. 3508, págs. 228-231) Orihuela (año 51, 1 de septiembre de 1932, núm. 14, págs. 315-316) Barcelona (año 75, 15 de septiembre de 1932, núm. 17, págs. 353-355) Sevilla (año 75, 19 de septiembre de 1932, núm. 1210, págs. 253-256) Madrid-Alcalá (año 47, 1 de octubre de 1932, núm. 1568, págs. 336-341) y Gerona (año 76, 28 de noviembre de 1932, núm. 13, págs. 333-336)

(100) Reproducida en los boletines citados en la nota 106, salvo el de Gerona.

(101) "Resolución interesante de la Audiencia sobre la competencia del Juez de Instrucción para conocer en el interdicto planteado por el Párroco de San Martín de Laspra contra la incautación del cementerio parroquial por el Ayuntamiento de Castrillón....", BOE de Oviedo, año 68, 15 de septiembre a 11 de octubre de 1932, núm. 13, págs. 161-162.

de Laspra, dado que por el poder ejecutivo aun no habian sido dictadas las bases para la realizacion de las expropiaciones y que mientras tal expropiacion no tuviera lugar, asi como el consiguiente pago, no podia efectuarse la incautacion, y condenando al Ayuntamiento de Castrillon al pago de costas y de danos y perjuicios.⁽¹¹²⁾

Para finalizar con esta alusion a la distinta postura que en materia de incautacion de cementerios parroquiales se mantuvo por la misma autoridad civil, no queremos dejar de reseñar la sentencia dictada por el tribunal contencioso-administrativo de Leon el 15 de marzo de 1933, por la que se revocaba el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Sabero - que, hay que destacarlo, habia tenido lugar despues de la circular del gobernador civil de la provincia, antes reseñada, contraria a la posibilidad de la adopcion de tales acuerdos- la contundencia de esta sentencia es altamente expresiva.

"RESULTANDO que el Ayuntamiento de Sabero en sesion celebrada el veinticuatro de Abril de mil novecientos treinta y dos, acordo la incautacion del Cementerio de Sahelices de Sabero, acuerdo contra el cual interpuso recurso de reposicion el Cura Economo D. Francisco Alvarez Rodrigo, y desestimado este, el presente contencioso-administrativo.

"RESULTANDO que tramitado este recurso en legal forma, el actor formalizo la demanda con la suplica de que se declare nulo y sin ningun valor el acuerdo recurrido.

...

(112) "Cementerios parroquiales: Sentencia de la Audiencia provincial a favor del cementerio de San Martin de Laspra (Castrillon)", BOE de Oviedo, año 69, 1 de enero a 1 de marzo de 1933, num. 1, pags. 11-13.

«CONSIDERANDO que el artículo 12 de la Ley de 30 de Enero de 1932, dice en su párrafo segundo: "Así mismo los Municipios podrán incautarse de los Cementerios parroquiales o de aquellos otros que de hecho presten el servicio de Cementerio general dentro del término municipal respectivo, expropiando, en los casos en que así proceda, el derecho que sobre ellos pueda acreditarse, con sujeción a las Bases que se establezcan por el Poder Ejecutivo".

«CONSIDERANDO que, al acordar el Ayuntamiento de Sabero la incautación del Cementerio Parroquial, anteriormente al establecimiento por el Poder Ejecutivo de las bases a que la disposición citada se refiere, ha procedido con notoria incompetencia y abuso de poder.

«FALLAMOS: que desestimando la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda alegada por el Sr. Fiscal, debemos revocar y revocamos el acuerdo del Ayuntamiento de Sabero fecha veinticuatro de Abril de mil novecientos treinta y dos, por el que se incautó del Cementerio Parroquial de Sabalices de Sabero, sin hacer expresa condena de costas.» (113)

Como hemos indicado destaca que, pese a interpretaciones semejantes a la de la sentencia transcrita, también las había en el sentido dado por la Dirección general de Administración, antes aludida, y tal confusión dió lugar a numerosas incautaciones previas a la existencia de las tantas veces repetidas bases de expropiación o incluso, al margen de la problemática que la existencia o no de las mismas pudiera plantear, según el párrafo segundo del artículo primero de la ley.

tal era la denuncia que también formulaba la "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y

(113) "Sentencia del tribunal Contencioso-Administrativo de León, revocando el acuerdo de Sabero sobre incautación del Cementerio parroquial". BOE de León, 20 de abril de 1933, num. 2, págs. 168-170.

enterramientos" publicada en el boletín eclesiástico de la diócesis de Barcelona a la que ya hemos aludido. En ella se manifestaba que los alcaldes de la provincia, separándose del contenido del citado párrafo segundo, daban una versión muy singular de este precepto en relación con lo determinado por el artículo segundo de la norma, tomando como base para la incautación "si seguimos lo indicado en la citada "Instrucción"- una interpretación antifrídica, y dando a los parrocos unas instrucciones muy distintas a las que hemos visto impartidas por el obispo de Zamora:

"La ley de secularización, en el artículo 14 habla de los cementerios municipales y parroquiales; en el artículo 29 trata de los cementerios de carácter privado"(114). Los cementerios privados"(115) se contradistinguen de los públicos, que son los que prestan el servicio de cementerio general, y estos, los públicos, pueden ser municipales o parroquiales. Es una interpretación completamente errónea, destituida de todo fundamento, la que han querido dar a este párrafo de la ley algunos Ayuntamientos, entendiéndolo por cementerio privado el parroquial y solicitando o exigiendo del Parroco su administración. Por lo tanto, no tienen derecho los Ayuntamientos a intervenir en la administración de los cementerios parroquiales y los Sres. Parrocos deben resistir con toda firmeza contra las intromisiones indebidas aun en el fuero civil, hijas solamente de pasiones sectarias y efervescencias irreligiosas e impías que tanto por desgracia abundan con daños incalculables para los altos valores del espíritu y quebranto muy lamentable de la paz de los pueblos."(116)

(114) En bastardilla en el original.

(115) 8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120.

3.2.2. La nunciatura y las conferencias de metropolitanos.

La problemática expuesta hizo que el nuncio cursara el 8 de julio de 1932 una carta a todos los obispos en la que les pedía que le comunicaran si por el Estado, la provincia o el municipio se había realizado en la diócesis alguna incautación de cementerios católicos "que no solo de derecho, sino también de hecho, estuvieran bajo el dominio y la administración de la Iglesia", señalando, en tal caso, cuantos y cuáles eran estos.⁽¹¹⁶⁾

Y esta misma problemática fue causa de que el acta de la conferencia de metropolitanos de primeros de noviembre de 1932 se retiriera expresamente a la cuestión de las incautaciones de los cementerios parroquiales. En esta referencia se recogían las posturas mantenidas por los distintos miembros de la jerarquía en las instrucciones impartidas con carácter mayoritario, aludiendo así a que la protesta a realizar ante las incautaciones debía fundamentarse tanto en la ausencia de indemnización como en la falta de las bases a dictar por el poder ejecutivo y consignando las ocasiones en que se había obtenido la revocación del acuerdo de las corporaciones municipales, así como la posible vía, en caso de que esta no se obtuviera,

(116) *Esglesia i Estat durant la segona...*, III, págs. 109-110.

ante la jurisdiccion ordinaria.

"En cuanto a la incautacion de Cementerios propiedad de la Iglesia por los Ayuntamientos, debe protestarse en nombre de los derechos de la misma, y por hacerse antes de indemnizar, segun exige la ley vigente de expropiacion forzosa, y de que se publiquen las bases que, segun la ley sobre Cementerios de 20 de enero de 1932, ha de dictar el Poder ejecutivo para regular la expropiacion. Esta protesta ha de constar en el acta de incautacion, conviniendo siempre presentar al Ayuntamiento recurso pidiendo la revocacion del acuerdo, lo cual se obtuvo por los Sres. Parrocos de Coo, Barros, San Mateo y Los Corrales, de la diocesis de Santander, pudiendo reservarse para lo futuro la accion ante el Juzgado de Instruccion, si no se revoca el acuerdo del Municipio."''''

La razon de que en el acta de la conferencia no se aludiera en materia de cementerios mas que a los problemas relativos a la incautacion de los parroquiales y, en epigrafe aparte -pues este era tema planteado por la Constitution, no por la ley- a los relativos a la conduccion de los enterramientos, era que, pese a las numerosas cuestiones que, como analizamos en este capitulo, planteaba la nueva norma, aquella fue la que mas preocupó a los prelados en las conferencias episcopales previas a la de metropolitanas y, por ello, seria la que unicamente quedo recogida en el acta final.

La cuestion, en efecto, habia sido tratada en varias de las conferencias y en ellas se habia expresado la necesidad de efectuar la debida protesta ante los actos indebidos de las autoridades municipales. Destaca por su precision el acuerdo reseñado en el acta de la del arzobispado de Burgos, ya que los de las restantes fueron de

carácter mas generico."'''

"En cuanto a la ley de cementerios del 30 de enero del año corriente... se acordó: que se difundan, en cuanto sea posible, los derechos de la Iglesia, sobre todo por lo que hace a los cementerios parroquiales y de carácter general, de que habla el párrafo segundo del artículo primero de la ley mencionada, por ser a todas luces prematura e ilegal aun en el supuesto de la propia ley, cuanto mas en el plano del Derecho Canónico; pero que, si por fuerza mayor se atentara, como desgraciadamente se ha hecho ya en muchos casos, violar los derechos sagrados de la Iglesia en el particular, se procure levantar acta, en forma legal, o al menos privada, pero fehaciente, consignando la protesta, declinando responsabilidades en los atentadores, y reservando para lo futuro todas las acciones y derechos de la Iglesia."''''

Llegados a este punto no queremos dejar de consignar que frente a los atropellos de las autoridades municipales, tantas veces puestos de manifiesto por los miembros de la jerarquia y aqui apuntados, existian también otros ayuntamientos que, queriendo cumplir, o aparentar cumplir, los preceptos legales -con independencia de que fuera o no el tiempo de adoptar un acuerdo, pues bien podian haber esperado a la aparición de las bases de expropiación para hacerlo- ingeniaron, con el fin de no expoliar a la Iglesia, un simulacro de apropiación del cementerio parroquial. Estos casos fueron puestos de manifiesto también por el

(118) Tal sería el caso de la conferencias de Toledo y Sevilla o de los comentarios hechos por los obispos de Jaén, Málaga y Guadix-Baza que el 23 de octubre escribieron directamente desde Roma, donde se encontraban realizando la visita "ad limina" al cardenal VIDAL. Tanto la conferencia de la provincia tarraconense, como la de Granada, así como los sufragáneos de la compostelana -que no se celebró debido al estado de salud del arzobispo, Dr. fray Zacarías MARTÍNEZ NGREZ- no trataron este punto; igual ocurrió con la provincia cesareugustana.

(119) Op. cit. págs. 393-394.

arzobispado de Burgos, tal como consta en los puntos que dicha provincia eclesiástica proponía para ser tratados en la conferencia de metropolitanos y que el Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO remitiría al cardenal VIDAL el 10 de agosto de 1932:

"Conducta a observar con los cementerios propiedad de la Iglesia. Ocurre que algunos buenos Ayuntamientos quieren o comprarlos o arrendarlos mediante un canon anual para pago de Organista, para luego devolverles."⁽¹²⁰⁾

Claro que, según hemos visto reflejado, y aunque esta actitud municipal realmente se daba,⁽¹²¹⁾ no era este el caso general, de ahí que las conferencias de sufragáneos que abordaron el tema, insistieran en la defensa de los derechos de la Iglesia, si bien discrepando en la forma de efectuar tal defensa.

Así, la de Valencia señalaba que, al saltar las bases del poder ejecutivo, cabía defender la necesidad de un previo concierto con la autoridad eclesiástica, pero no apuntaba la forma de realizar tal defensa, su efectividad o la actitud a mantener en el caso de que por las autoridades municipales se hiciera caso omiso de tal propuesta, ni tampoco, aun efectuándose dicho concierto y fijándose, por tanto, la consiguiente indemnización, si debía protestarse o no por el hecho de la incautación. Se trataba, pues, de una actitud conciliadora, ya que, como hemos visto, en el acta final de la conferencia de metropolitanos no solo se apuntaba la necesidad de protesta en defensa de los derechos de la Iglesia, sino también que ésta debería realizarse tanto por la ausencia de indemnización como por la falta de normas de regulación de la expropiación de los cementerios parroquiales. En realidad la conferencia de

(120) Op. cit., pág. 344.

(121) Ver la nota núm. 46.

metropolitanos, probablemente mas realista ante la actuacione de las autoridades municipales, contemplaba el caso de expropiacion sin indemnizacion, mientras que la de Valencia apuntaba la posibilidad de que las autoridades municipales se avinieran a fijar aquellas:

"Ley de Cementerios: Por ella se arroga el Estado la facultad de incautarse de los Parroquiales; pero no en absoluto, sino dentro de *ciertas normas*, "" que aun no se han dado. *Por hoy*, ""¹²² pues, puede defenderse todavia¹²³ la necesidad de un previo concierto con la Autoridad eclesiastica y la indemnizacion. ""¹²⁴

Los sufraganeos de la provincia vallisoletana, que, al igual que los de la compostelana no se reunieron en conferencia debido tambien al estado de salud de su arzobispo, daban, por su parte, los siguientes pareceres en la correspondencia cursada al cardenal VIDAL:

El Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE, obispo de Salamanca, en su carta de 21 de octubre de 1932 recogia la actitud generica de la autoridad municipal en lo que, mas que una aportacion a la posible actuacion eclesiastica, era un lamento ante la realidad:

"No alcanzo que se puede hacer en todos esos problemas. Donde la Ley no llega en el espiritu sectario y perseguidor, los interpretes y ejecutores se encargan de llegar. Se prometen en la Ley secularizadora de cementerios bases a que debiera ajustarse la expropiacion cuando los Ayuntamientos se incauten; luego no se dan las bases, y los Ayuntamientos se incautan sin indemnizar. ""¹²⁵

El Dr. Manuel LOPEZ ARANA, administrador apostolico de Ciudad Rodrigo, señalaba simplemente, por carta de 22 de

(122) En bastardilla en el original.

(123) Op. cit. pág. 402.

(124) Op. cit. pág. 405.

octubre, que sobre esta ley todo el episcopado habia dado ya normas, las cuales debian ser explicadas constantemente a los fieles. "para que estos no se acostumbren al naturalismo, y forman parte importantisima de las reclamaciones legales de la Iglesia contra las injerencias del Estado." (125)

El de Astorga, Dr. Antonio SENSO LAZARO seria mas realista que sus dos hermanos en el episcopado citados y, centrándose en el fin y fundamento de la conferencia de metropolitanos, apuntaba en su carta de 24 de octubre su idea sobre las iniciativas a emprender por la Iglesia:

"Convendria sobremanera que el Episcopado se dirigiera al Gobierno exponiendo los atropellos e ilegalidades que irrecuentemente cometen autoridades provinciales y municipales en materia de Cementerios, pidiendo que cesen." (126)

Tambien el de Zamora, en las notas enviadas al cardenal VIDAL el dia 28 de octubre exponia un detallado parecer muy acorde con la situacion que se vivia y que, entre los dados por los miembros de la jerarquia, resultaba el más encaminado a una actitud practica:

"Debe defenderse la propiedad de los cementerios parroquiales hasta tanto que no sean expropiados, previa indemnizacion, no entregando las llaves de los mismos sino por imposicion violenta de la Autoridad civil, y en este caso levantar acta de la entrega, si fuera posible, o, por lo menos, hacerla ante testigos, con protesta siempre y reserva de los derechos de la Iglesia; pero facilitar en ellos los enterramientos de acatolicos, que seran inhumados en lo que era cementerio civil, aun desaparecida la tapia que los separaba del concesional, y, en ultimo termino, en este." (127)

(125) Op. cit., pág. 407.

(126) Op. cit., pág. 409. Ver el epigrafe 4 del capitulo anterior.

(127) Op. cit., pág. 412.

Por ultimo, el obispo de Avila, Dr. Enrique PLA Y DENIEL, en la carta sin fecha enviada a VIDAL indicaba la necesidad de obtener "la declaración general ... de que no puede procederse a la incautación de cementerios parroquiales sin expropiación." si bien dicha declaración no debía pedirse si había peligro de que se negara, debiendo esperarse a "ocasión más oportuna."¹²⁸

Como hemos visto por el acta final de la conferencia de metropolitanos estos completaron, ampliándolos, los diversos pareceres de los distintos prelados bajo el prisma, ya indicado, de la actitud antifuridica de los Ayuntamientos, dando las normas a seguir por el episcopado. No obstante, no se publicarian en los boletines eclesiásticos nuevas instrucciones sobre la problematica de los cementerios hasta la aparición del reglamento de 8 de abril de 1933, el cual, al contener las anunciadas bases para la expropiación, vino a hacer variar la postura a mantener por la jerarquia dando lugar, por tanto, a una nueva serie de directrices de los distintos sufragáneos.

No tenemos datos sobre el numero de las incautaciones realizadas con anterioridad a la aparición de las referidas bases. Sin embargo, la documentación analizada expresa, creemos que suficientemente, que estas fueron numerosas, opinión que corrobora la contestación dada al nuncio, a raíz de la mencionada carta de este de 8 de julio de 1932, por la archidiócesis de Tarragona y en la que, con independencia de ponerse de manifiesto, una vez más, la distinta actitud adoptada por los representantes de la administración del Estado, se indicaba que de un total de setenta cementerios parroquiales o mixtos, veintiocho habían sido ya incautados

(128) Op. cit. pág. 414.

a primeros de noviembre de 1932."***

El cementerio de Farragona, que no era propiedad de la Iglesia, sino de una fundación benéfica que el Dr. VIDAL, como arzobispo, presidía, no sería incautado hasta marzo de 1933 -también previamente a la aparición del reglamento de la ley de cementerios- hecho que dio lugar a la publica

- (129) "Nota enviada a S.E. para el Sr. Nuncio el 6-XI-32. En la diócesis de Farragona existen 141 cementerios, de los cuales 43 son parroquiales, 71 municipales y 27 mixtos. Luego de publicada la ley de secularización de cementerios, se hicieron gestiones cerca del Gobernador civil de Farragona al objeto de que se interpretase en sentido restrictivo, y así se consiguió por algún tiempo; pero, no habiéndose publicado las bases para indemnización y cediendo ante presiones de elementos extremistas, creyo que no debía esperarse dicha publicación y ordenó que los Ayuntamientos se incautaran de los parroquiales. Hasta la fecha los incautados son 18 y 10 de mixtos. Se han resistido los parrocos, apurando todos los medios, pero en los pueblos en que los rectores se han limitado a poner la inscripción 'Cementerio municipal' solo pudieron obtener algún retraso. En algunos se han impuesto; y en otros nada se ha dicho a los parrocos, continuando su plena intervención y administración. Al incautarse los alcaldes de cementerios parroquiales o mixtos, siempre los parrocos han hecho constar su protesta, con reserva de emplear todos los medios legales en defensa de los derechos de la Iglesia. Los cementerios parroquiales generalmente carecen de fondos, por ser necesarios, y aun en muchos casos insuficientes, los pequeños derechos de arancel por sepultura para su conservación. En dos de ellos, que tenían algún remanente, ha quedado este depositado en la Curia, de acuerdo con la autoridad gubernativa provincial, y se espera la publicación de las aludidas bases. En algunos cementerios ha habido profanación de cruces e imágenes, pero han sido casos aislados..." (Op. cit. pag. 110, nota 2).

No tenemos datos del resto de las diócesis, pero nos consta la indagación efectuada por la jerarquía a raíz de la petición de datos del nuncio. Así lo demuestra la circular del arzobispo de Burgos, Dr. Manuel DE CASTRU ALONSO, de 10 de agosto de 1932, solicitando a los curas parrocos económicos y encargados de iglesias de la archidiócesis la información que aquí requería (BOE de Burgos, año 75, 16 de agosto de 1932, num. 15, pag. 257), publicación que, al no encontrarla en el resto de los boletines eclesiásticos consultados lleva a pensar que o fue requerida privadamente por los demás miembros de la jerarquía o que a esta llegaba puntualmente la información sobre las incautaciones efectuadas en los distintos municipios, caso que no parece ser el de Burgos.

También nos consta el comentario publicado en el boletín eclesiástico de la diócesis de Tortosa que, al dar instrucciones a los sacerdotes sobre las posibles incautaciones por parte de los ayuntamientos, una vez publicado el reglamento de 8 de abril, señalaba: "Aunque abusivamente y sin esperar el Reglamento se han verificado ya tantas incautaciones..." (s.f. "Advertencias importantes sobre el Reglamento de la Ley de Cementerios y sobre entierros católicos", BOE de Tortosa, año 75, 15 de mayo de 1933, num. 9, pags. 76-79, reproducidas por el BOE de Coria, año 68, 1 de junio de 1933, num. 11, pags. 83-85).

protesta del cardenal VIDAL por medio de su escrito "Incautación del cementerio de Iarragona" en el que se quejaba de la conculcación de los derechos del "Pio Hospital de San Pablo y Santa Fecla", institución que cuidaba de enfermos pobres, y de la desaparición de todo símbolo de carácter religioso de la fachada."'''

(130) "Profunda pena ha producido en Nuestro Corazon de Padre y Pastor el hecho lamentable de la incautación del Cementerio de esta capital, sin que fueran respetados los derechos de propiedad legítimamente adquiridos por el Pio Hospital de San Pablo y Santa Fecla, benéfica y meritísima institución destinada por su ilustre fundador al cuidado y alivio de los enfermos pobres y menesterosos, que ha merecido Nuestra constante solicitud de Patrono y Prelado, como la de Nuestros dignísimos Predecesores.

«No han bastado para evitarlo las gestiones practicadas por la Junta Administrativa al objeto de llegar a una decorosa solución de concordia, dispuesta siempre a buscarla, mientras queden a salvo su dignidad y los intereses del benéfico Establecimiento, que, con la asidua cooperación del personal facultativo y de asistencia, ha venido siendo administrado celosamente y a completa satisfacción Nuestra por dicha Junta, acreedora por ello a Nuestra gratitud y a la de todos vosotros.

«No se han tenido tampoco en cuenta los poderosísimos motivos de orden legal aducidos por la referida Junta, ni la voluntad de los fundadores, donantes y protectores, quienes, con delicadeza caritativa y humanitaria, no quisieron convertir en fuente de ingresos, como un tributo cualquiera, el gravamen sobre el dolor y la pena, indispensable para el sobrio sostenimiento del Cementerio, sino en alivio de los enfermos pobres y necesitados.

«Más todavía ha lacerado Nuestra alma la desaparición en los muros y en la fachada principal del Cementerio del símbolo sacrosanto de nuestra Redención, bajo cuya sombra quisieron acogerse nuestros antepasados, garantidos por la legislación vigente, al elegir aquel terreno, adquirir nichos o construir mausoleos donde reposaran sus restos morales; y precisamente cuando todo el orbe cristiano está preparándose para celebrar el XIX centenario de la Cruz, en la que fuimos redimidos y a la cual debemos nuestra civilización,

«Ni siquiera los motivos históricos u ornamentales han prevalecido al empeño de suprimir la Cruz en aquel lugar sagrado, cuando, a lo menos por tales motivos, se conserva en muchos monumentos, y el mismo Gobierno de la República no ha querido suprimirla de la Orden de Isabel la Católica,

«Deploramos el hecho como síntoma doloroso y realidad amarga, que, en cumplimiento de Nuestro deber de Prelado y Patrono del Santo Hospital, Nos obliga a exteriorizar Nuestra sentida protesta. La queja amorosa y dolorida del Padre, de nadie puede ser mal recibida. Fervorosamente suplicamos a Dios Nuestro Señor se apiade de tantas almas apartadas de la Cruz y confiadas a Nuestro cuidado, para que vuelvan al camino verdadero de la salvación.

3.2.3. Los derechos de los fieles.

Debemos destacar ahora como las consecuencias de la municipalización de los cementerios no solo afectaban a los derechos que la Iglesia, como institución, tenía sobre ellos, sino también a los de los fieles como personas jurídicas individuales, ya que podían sufrir menoscabo en sus intereses tanto del resultado de la incautación y consiguiente transformación del cementerio parroquial en municipal, como de la creación de un nuevo cementerio general de propiedad del ayuntamiento.

Este tema, si bien fue tratado de soslayo por la jerarquía, más interesada en la defensa de los genéricos

A nuestros queridos fieles que poseen monumentos funerarios en el Cementerio les exhortamos no dejen de ostentar sobre ellos el símbolo de nuestra fe y de nuestra esperanza, y a todos pedimos continúen honrando la memoria de sus difuntos con los mismos actos de piedad en sus tumbas. Sin la Cruz se convierte el Cementerio un campo de dolor, sin esperanza y sin consuelo; de ella pende aquel que dijo: "Yo soy la resurrección y la vida", con los brazos abiertos para atraer a su seno y llevar a la paz sempiterna a los que bajo su amparo se acogieron en vida y en muerte. Honradle, pues, en las sepulturas particulares, y en los actos de vuestra vida pública y privada, para desagraviarle de las injurias y desprecios que se le infligen al desterrarle del lugar de preferencia que hasta el presente había ocupado."

27 de marzo de 1933, "Incautación del cementerio de Iarragona", BOE de Iarragona, año 45, 27 de marzo de 1933, num. 5, págs. 70-72 y Op, cit, págs. 707-708.

El arzobispo enviaría este escrito al secretario de Estado vaticano, en unión de otros documentos de diversa índole, con la carta que le escribiera el 1 de junio de 1933 (Op, cit, págs. 771-776).

derechos de la Iglesia, no dejó de aparecer en alguno de los documentos episcopales, según parece motivado por las inquietudes de los sacerdotes, que indudablemente estaban más cerca de las preocupaciones de sus feligreses. Así, a él se referiría ya el arzobispo de Burgos, Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, en las contestaciones que el 8 de marzo de 1932 daba a diversas cuestiones planteadas por los párrocos de su jurisdicción y que, a causa de la supresión de la franquicia postal, publicaba en forma conjunta en el boletín eclesiástico.

Tratando la cuestión concreta de la incautación remarcaba, sin dejar de reiterar los pasos que debían necesariamente darse por la autoridad municipal para proceder a realizarla, como esta no podía afectar en modo alguno a derechos adquiridos por los fieles sobre sepulturas a perpetuidad.

"Cuando los Municipios, previo el cumplimiento de las bases que en su día establezca el Poder ejecutivo y la correspondiente indemnización, que ha de preceder en todo caso a la expropiación e incautación, hagan suyos los cementerios parroquiales, es de tener en cuenta que a aquellos que adquirieron antes derechos de sepulturas a perpetuidad, estos derechos adquiridos les deberán ser respetados, siempre que las concesiones estén hechas en debida forma, pues cuando una cosa cambia de dominio no por eso desaparecen los derechos que sobre ella tengan terceras personas." (131)

Estas instrucciones serían recogidas por los boletines eclesiásticos de Barcelona y Vitoria, que en su "Sección de Consultas" indicaba que lo tomaba del de Canarias. En esta "Sección" se añadía al caso contemplado por el arzobispo de Burgos un análisis de la situación que podía crear la existencia de un cementerio municipal nuevo -supuesto poco analizado por la jerarquía, dada la gran

(131) 8 de marzo de 1932, "Instrucciones.- A nuestros sacerdotes", BOE de Burgos, 15 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 111-113.

profusión de cementerios parroquiales que hacían las veces de generales y la lógica hipótesis de su incautación como la vía más rápida de todos los municipios para contar con su propio cementerio general. En tal situación, se señalaba, habría que asimilar el cementerio parroquial ya no utilizado a un cementerio privado, dándole, por tanto, el tratamiento que para estos determinaba el artículo segundo de la ley, cuyo contenido pasaba a interpretarse.

....

«49) Y si el Municipio construye un cementerio propio, ¿pierden sus derechos los que posean panteones familiares en el cementerio parroquial o tengan adquirido derecho de sepultura perpetua? Parece que en este caso debe aplicarse lo que se dice en el art. 23.: "Promulgada esta Ley, los Municipios... dispondrán en el plazo de un mes, una revisión de derechos establecidos hasta ese momento para las inhumaciones, determinando cuales sean y a que personas correspondan". Ciertamente que esto se refiere a los cementerios privados; pero, desde el momento que un cementerio, parroquial hasta ahora, deja de utilizarse, por haber construido el Municipio uno propio, debe considerarse como privado o, por lo menos, no debe ser de peor condición que estos.

«52) En el pueblo de X, el Ayuntamiento ha inaugurado un cementerio que ya tenía construido hace tiempo, y con pretexto de ejercer la intervención a que se refiere el art. 24, pide al parroco la llave del cementerio parroquial. ¿Tiene este que entregársela? La llave pertenece al dueño del cementerio. La intervención que se concede al Ayuntamiento no exige que tenga la llave, y mucho menos si el cementerio queda totalmente clausurado. Entonces tampoco el Ayuntamiento puede intervenir en la administración de dicho cementerio.

«62) ¿Y podrá el parroco percibir derechos por renovación de sepulturas en un cementerio ya clausurado? Evidentemente, pues nada lo prohíbe. Puede renovar sepulturas y aun pueden concederse a perpetuidad para los restos que en ellas descansan ya. La Ley prohíbe enterrar allí, pero nada más. Es de advertir, sin embargo, que la concesión de sepulturas a perpetuidad pudiera ser un obstáculo,

si algun dia fuera preciso enajenar esos cementerios. En todo caso corresponde al Prelado el concederlas." (132)

(132) "Sección de consultas.- Sobre cementerios y sepulturas". BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120 y BOE de Vitoria, año 68, 15 de abril de 1932, núm. 9, págs. 241-243.

3.2.4. La reacción de la jerarquía ante el reglamento de desarrollo de la ley de cementerios. Obispados y arzobispados de Madrid-Alcalá, Palencia, Barcelona, Toledo, Orihuela, Segovia, Burgos, León, Tortosa, Zamora, Oviedo, Palencia, Lugo, (administrador apostólico de Mondoñedo), Barcelona, Valencia, Gerona, Sevilla, Vitoria, Tuy y las conferencias de metropolitanos.

Hasta el 9 de abril de 1933 no aparecería el reglamento de desarrollo de la ley de cementerios, conteniendo las anunciadas bases a que debería atenerse toda expropiación realizada por los municipios. Su publicación hizo que, después de un año de silencio de la jerarquía -cuyos documentos sobre este tema se publicaron principalmente, como hemos visto, en los meses de enero a abril de 1932, salvo escritos esporádicos con motivo de alguna incautación concreta- esta volviera a alzar su voz con una serie de nuevos documentos en los que, junto a la reiterada protesta por tal normativa secularizadora, se daban nuevas instrucciones a los curas párrocos sobre la actitud que debían adoptar ante las incautaciones que, siguiendo lo establecido en el nuevo reglamento, pudieran producirse.

Así, ya el 1 de mayo de 1933 publicaba el boletín oficial de Madrid-Alcalá una circular del Dr. Leopoldo EIJÓ Y GARAY fechada el 25 de abril y dirigida al clero parroquial diocesano. Esta circular, reproducida en otros boletines eclesiales, resaltaba cómo la incautación era meramente facultativa de los municipios y, por tanto, sería realizada por "los que quieran"⁽¹³³⁾... porque ningún precepto legal les obliga a hacerlo". Junto a ella recordaba como según el canon 2334 incurrian *ipso facto* en excomunión re-

(133) En bastardilla en el original.

servada a la sede apostólica los que dictaran leyes, mandatos o decretos contra la libertad y los derechos de la Iglesia, exhortando al clero a hacer que los católicos tuvieran presente dicha disposición, "pero... sin mezclar las cosas religiosas con materias de contiendas humanas, sin animosidades ni altiveces hostiles, que mas consiguen alejar de la Iglesia que atraer a su amor y respeto; antes al contrario, con espíritu de caridad, haciendo ver cuan grave ha de ser la injuria cuando el espíritu siempre maternal de la Iglesia la condena con tan graves censuras", y a fin de que procuraran hacer ver a los concejales creyentes y a los que, no siendolo, prefirieran respetar los derechos eclesiásticos, "que esta en su voluntad el incautarse o no de los cementerios parroquiales, puesto que la legislación les faculta a ello, pero no les obliga."

La posible pena de excomunión recaería de esta forma no en el legislador sino en los integrantes de las corporaciones municipales, los cuales "No pueden, pues, ampararse en coacción alguna, ni siquiera de obligación legal, que les libre de incurrir en las penas eclesiásticas, si perpetran la incautación o de algun modo eficaz cooperan a ella."

Hechas estas advertencias pasaba el prelado a dar normas de actuación a los parrocos para los casos en que se llevara a cabo la incautación, y por las que les exhortaba a defender rotundamente los derechos de la Iglesia:

"Cuando les sea notificado el día y hora de la incautación, dense por enterados, y si todavía tuvieran esperanza de que pudiese evitarse o aplazarse el acto, den los pasos que estimen conducentes a ello; pero guardense de excitar los ánimos o de cooperar a movimientos de protesta de tal naturaleza que puedan considerarse como alteraciones del orden público.

"Asistan al acto a que se les hubiera citado y vayan acompañados de dos testigos suyos que

también firmen después acta de todo lo ocurrido, la cual deberá ser enviada a la Curia Eclesiástica. Cuando les sea notificada la incautación, manifiesten su protesta contra ella, nieguen su consentimiento: requieran a la autoridad municipal a desistir de la incautación; y si persiste en ella, digan que por orden superior se declara incursos en excomunión reservada al Sumo Pontífice a los causantes, a tenor del canon 2.334, párrafo 12, y en seguida retirense, sin prestar su cooperación a acto alguno pertinente a la sacrilega usurpación. Se negarán, pues, a entregar llaves, objetos o libros; y solo si por violencia de la fuerza material, o por sentencia cuyo incumplimiento lleve aparejado el acto de fuerza, v.gr.: encarcelamiento, entregarán lo que se les exija, haciéndolo constar así. Y de todo cuanto ocurra darán cuenta a la Curia.

«Si llegase a consumarse la incautación, solo quedara defender los derechos de la Iglesia en la forma que permite el art. 10. Para ello el párroco reunirá todos los títulos y documentos, copia de inscripción en el Registro de la Propiedad, o simple pero detallada referencia a ella; en suma, cuanto demuestre la propiedad de la Iglesia sobre el cementerio, y lo remitirá todo a la Curia diocesana, donde se le darán instrucciones para proceder eficazmente. Cuidé, pues, el Venerable Clero de no poner el acto que dice el art. 10 sin recibir ordenes e instrucciones de la Curia, que las dará también para los actos sucesivos; y especialmente absténgase de prestarse, sin la autorización superior debida, a la expropiación de que tratan los artículos 11 y 19, porque podrían incurrir en las censuras que expresa el can. 2.347. (134) y (135).»

Siguiendo la pauta del obispo de Madrid-Alcalá, y con independencia de lo que indicamos en nota a pie de página, el resto de la jerarquía se apresuró a dar normas a su

(134) Para los artículos que se citan ver el reglamento en el apéndice núm. 2.

(135) 25 de abril de 1933, "Circular núm. 110", BDE de Madrid-Alcalá, 1 de mayo de 1933, núm. 1582, págs. 145-148. Entre los boletines eclesiásticos consultados hemos encontrado reproducida esta circular en los de Mallorca (año 73, 14 de mayo de 1933, núm. 9, págs. 156-159) Vich (año 79, 15 de mayo de 1933, núm. 2121, págs. 222-224) y Vitoria (año 69, 1 de junio de 1933, núm. 12, págs. 287-290).

clero para los casos de incautación de cementerios parroquiales por la autoridad municipal y, así, aparecerían instrucciones similares a las dictadas por el Dr. Leopoldo EIJO GARAY en el boletín eclesiástico de Palencia, el cual señalaba que, en cada caso, los párrocos, una vez conocido el acuerdo municipal de incautación, debían consultar al obispado, si hubiera tiempo para ello, y, caso contrario, remitir inmediatamente a este, en unión de los datos, referencias y documentos sobre el cementerio incautado, copia certificada del acta de incautación, acto al que no debían dejar de comparecer y en el que debían formular enérgica protesta en nombre de la Iglesia, haciendo saber, igualmente, las penas eclesiásticas a tenor del canon 2.346.⁽¹³⁶⁾

El obispado de Barcelona, por su parte, publicó, también inmediatamente, un "Aviso interesante a los Rdos. Párrocos" en el que se les indicaba que "no procedan a autorizar ni consentir la expropiación de su respectivo cementerio parroquial sin antes consultar con el Rdmo. Ordinario, y atenerse a sus indicaciones observando siempre las leyes canónicas sobre la enajenación de bienes eclesiásticos".⁽¹³⁷⁾ "Aviso" que sería completado con las pertinentes orientaciones el 18 de mayo.

Cita especial merece el preámbulo a las instrucciones dadas por el Dr. Feliciano ROCHA PIZARRU, vicario capitular de Toledo, en el que figuraba el siguiente párrafo sobre el nuevo reglamento:

"No sólo se violan los derechos de la Iglesia mandando a los Ayuntamientos que se incauten de los cementerios, sino que se exige que la Iglesia

(136) 25 de abril de 1933, "Vicaría General del Obispado.- Circular", BOE de Palencia, año 83, 29 de abril de 1933, págs. 226-229.

(137) 29 de abril de 1933, "Aviso interesante a los Rdos. Párrocos", BOE de Barcelona, año 76, 29 de abril de 1933, núm. 8, págs. 149-150.

presente títulos que acrediten sus derechos, cuando la simple posesión, en muchos casos secular y por añadidura de todos conocida, era razón suficiente para que se hubiera impuesto a los Ayuntamientos la obligación de indemnizar a la Iglesia mientras no pudieran alegar títulos que los excusaran."

Sobre este párrafo hay que destacar que, como es fácil de apreciar, daba una interpretación errónea a lo dispuesto en el artículo sexto del reglamento, al decir que este "mandaba" a los ayuntamientos efectuar la incautación, cuando dicho artículo alaudia, al igual que hacía la ley, al carácter de voluntariedad de esta, voluntariedad en la que, como hemos visto, se apoyaban precisamente otros prelados para disuadir a los ayuntamientos de realizarla.

Pero, además, el Dr. ROCHA PIZARRO se quejaba de la fórmula que se había establecido para fijar la cuantía de la indemnización, con una apreciación igualmente equívoca, toda vez que el reglamento establecía un procedimiento concreto para la misma, procedimiento en el que el gobierno tan sólo intervenía en caso de desacuerdo entre las partes y tras la pertinente peritación, siendo su resolución recurrible en vía contencioso-administrativa, tanto por vicio sustancial en los trámites reglamentarios como por lesión en la apreciación del valor del cementerio expropiado si dicha lesión representaba, cuando menos, "la sexta parte del verdadero justo precio", (*) extremos estos que el prelado parecía olvidar.

"Para la indemnización misma se ha establecido un procedimiento que la subordina a los apasionamientos de la política, por cuanto en definitiva se deja al arbitrio de los gobernadores el señalar la cuantía de la indemnización, cuando tan fácil hubiera sido encomendar esta función, tan ajena a la misión de los gobernadores, a Tribunales competentes."

Tras este preambulo el obispo pasaba a dar las pertinentes instrucciones sobre las pruebas de propiedad -que enumeraba prolijamente- del cementerio, y que los parrocos debian enviar al provisorato, y sobre otros extremos entre los que destaca la realizacion de la tasacion "hecha por dos personas peritas y de reconocida rectitud, a la cual anadiran su opinion particular y una breve noticia de la extension del cementerio, distancia de la poblacion, edificaciones que en el haya, estado de conservacion del mismo, numero de sepulturas enajenadas a perpetuidad o cedidas temporalmente, etc.", datos todos ellos que igualmente deberian enviar con toda urgencia." Premura esta que destaca, y es el unico caso que hemos encontrado en los boletines consultados, ya que el reglamento remitia el tema de la tasacion a momento posterior a la comunicacion por el ayuntamiento de la cantidad que estaba dispuesto a abonar."

Estas "Instrucciones" fueron reproducidas en diversos boletines eclesiasticos o inspiraron las dictadas en otras diocesis y, asi, entre los boletines investigados, las hemos encontrado publicadas integramente en el de Malaga¹⁴³ y con significativas variaciones en el de Orihuela, en el que el parraro transcrito en primer lugar de la introduccion del Dr. ROCHA PIZARRO aludiendo al nuevo reglamento, era recogido en la siguiente forma:

- (139) s.r. "Instrucciones del Excmo. Sr. Vicario Capitul.- I, Sobre incautacion de cementerios y declaracion de voluntad de entierro catolico.- II, Acerca de la intervencion de los sacerdotes como jurados en las causas criminales", BOE de Toledo, año 89, 2 de mayo de 1933, num. 6, pags. 98-103.
- (140) Ver el apéndice num. 2 y en el apéndice num. 3 el informe que el letrado D. Gabriel J. de Cáceres efectuó a petición del obispo de Segovia y al que nos adelante aludimos.
- (141) s.r. "Instrucciones.- Sobre incautación de cementerios, declaración de voluntad de entierro e intervención de los Sacerdotes como Jurados en causas criminales", BOE de Malaga, año 86, mayo del 1933, num. 7, pags. 134-140.

No solo se viola su propiedad [la de la Iglesia] autorizando⁽¹⁴²⁾ a los Ayuntamientos para que se incauten de los cementerios parroquiales, sino que se la exige que presente títulos que acrediten su dominio, cuando la simple posesión, en muchos casos secular y de todos conocida, era razón suficiente para que se hubiera impuesto a los Municipios la obligación de indemnizar a la Iglesia, mientras no se pudieran alegar títulos que los excusaran."

Y, tras reproducir literalmente la queja del vicario capitular de Toledo, que ya hemos comentado, sobre la fórmula establecida para determinar la cuantía de la indemnización, pasaba a dar las normas que habían de regir en la diócesis de Orihuela y en las cuales se separaba completamente del documento del Dr. ROCHA PIZARRO, siendo más similares a las dictadas para la diócesis de Madrid-Alcalá. De esta forma se comenzaba señalando en ellas:

"14. El mencionado Reglamento no impone a los Ayuntamientos la obligación⁽¹⁴³⁾ de incautarse de los cementerios parroquiales, sino que tan solo les concede facultad para poderla llevar a cabo, según el art. 62, por tanto dicha incautación depende exclusivamente⁽¹⁴⁴⁾ de la voluntad de los Ayuntamientos. Conviene, pues, que los católicos que forman parte de las Corporaciones municipales, sepan que incurrir *ipso facto* en excomunión *speciali modo* reservada a la Sede Apostólica "los que dicten leyes, mandatos o decretos contra la libertad y los derechos de la Iglesia" (Canon 2332, par. 1).

"Por tanto los señores Curas procurarán instruirles oportunamente con la mayor caridad, en particular a cada uno, nunca en público, haciéndoles ver cuan grave es la usurpación de bienes sagrados.

"23. Si estas gestiones previas no dieran el resultado apetecido, cuando les sea notificado el día y hora de la incautación (art. 72), asistan al acto acompañados de dos testigos suyos y hagan constar en el acta, que según el mencionado

(142) El subrayado es nuestro.

(143) En bastardilla en el original.

Reglamento debe levantarse, su protesta por la incautación, el derecho de la Iglesia sobre dicho lugar sagrado y las demás circunstancias que fuere conveniente quedasen consignadas en dicho documento, pidiendo copia del acta, la que Nos remitirán inmediatamente con informe de todo lo ocurrido.

«32. Verificada la incautación, acreditarán sin demora alguna el derecho de propiedad de la Iglesia, siguiendo las instrucciones que se dan en el dictamen técnico que en este mismo Boletín se publica, a las cuales también deberán atenerse los señores Curas de cuyos Cementerios se hubiesen incautado los Municipios antes de la publicación del Reglamento de referencia.»

Como vemos, en estas instrucciones, a diferencia de las publicadas por el vicario capitular de Toledo, se hacía hincapié, por una parte, en la voluntariedad de la incautación y, por otra, no se aludía a la tasación del cementerio, al ser este un tema que quedaba tratado en el punto tercero de las instrucciones transcritas al hacerse referencia a un dictamen técnico que el mismo boletín publicaba.

Este dictamen fue evacuado por el letrado D. Gabriel J. de Cáceres el 25 de abril de 1933 a instancia del Dr. Luciano PÉREZ PLATERO, obispo de Segovia, siendo publicado en el boletín de esta diócesis del día 29¹¹⁴⁴. Su finalidad esencial era informar a los curas párrocos sobre su actuación en los trámites relativos a las incautaciones y a la tasación consiguiente, la cual se efectuaría por estos una vez les hubiera enviado el ayuntamiento la hoja de aprecio con la cantidad que estaba dispuesto a abonar.

(144) 15 de mayo de 1933, "Circular núm. 1.- Sobre incautación de cementerios parroquiales y enterramientos católicos", BDE de Orihuela, año 52, 1 de junio de 1933, núm. 9, págs. 81-83.

(145) 25 de abril de 1933, "Decisiones del Poder Civil.- Sobre incautación y expropiación de cementerios católicos", BDE de Segovia, año 78, 29 de abril de 1933, núm. 8, págs. 196-204.

es interesante destacar de este dictamen que en el se señalaba, en la misma línea que hemos visto que hacia el vicario capitular de Toledo, que, según el reglamento, los ayuntamientos "han de incautarse" o "deberán" incautarse de los cementerios parroquiales, lo cual, tal como hemos apuntado, era una interpretación errónea. (146)

De contenido muy ponderado eran las instrucciones dadas por el arzobispo de Burgos, Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, el 6 de mayo de 1933. En ellas el prelado insistía especialmente en que el reglamento obligaba a los ayuntamientos a construir un cementerio municipal donde no lo hubiera, pudiendo, incluso, solicitar prorroga cuando no pudieran construirlo en el plazo de un año, e indicaba que

"...solo en los casos de verdadera necesidad o suma conveniencia podrán (147) los Municipios incautarse de los cementerios parroquiales, ateniéndose a las condiciones que el mismo reglamento señala. De la lectura del artículo 69 se desprende que a los Ayuntamientos no se les obliga a llevar a cabo tal incautación... De donde se sigue que aquellos Ayuntamientos que se incauten de los cementerios parroquiales, prescindiendo de la construcción de uno nuevo o de la petición de prorroga, despojan a la Iglesia de lo que legítimamente viene poseyendo."

Al señalar el procedimiento a seguir por el clero recomendaba a los curas parrocos una actitud plena de mansedumbre cristiana y respeto.

Al ser citado un Párroco por el Ayuntamiento para el acto de la incautación acudiría acompañado de

(146) Ver el apéndice núm. 3. Con independencia del boletín eclesiástico de Segovia, este dictamen fue también reproducido, en diversos boletines eclesiásticos, así, en el de Salamanca (año 80, 1 de junio de 1933, núm. 6, págs. 109-119) Brihuega (año 52, 1 de junio de 1933, núm. 9, págs. 87-93) Sevilla (año 76, 20 de junio de 1933, núm. 1227, págs. 166-174) o Mallorca (año 73, 15 de julio de 1933, págs. 270-278)

(147) En bastardilla en el original.

dos testigos de confianza, y con toda consideración, sin mostrar la menor intención de promover alboroto, y sin espíritu de contienda, hará las observaciones que estime oportunas, las cuales constarán en el acta que se ha de levantar del hecho de la incautación." (148)

Estas recomendaciones no figuran en todas las orientaciones del episcopado a los párrocos y no dejan de contrastar vivamente con el artículo noveno del reglamento, que establecía en su segundo párrafo que "La Autoridad municipal podrá en todo caso solicitar la cooperación de otras autoridades cuando lo estime oportuno para vencer la resistencia que a la incautación pueda oponerse por el dueño del cementerio o por cualesquiera otras personas." (149)

Las instrucciones dadas por el obispado de León insistían en la voluntariedad de la incautación y en las penas canónicas en que incurrían los miembros de los ayuntamientos que la realizaran, penas sobre las que los párrocos debían informarles y advertirles, y si les eran reclamadas las llaves del cementerio deberían entregarlas "ante el peligro de violencias, encarcelamientos, multas, etc., haciendo constar en acta que obran por los motivos indicados, y sin perjuicio de que en su día la Iglesia pueda ejercitar sus derechos sobre aquel sagrado lugar."

A diferencia del informe del letrado asesor del obispado de Segovia y de las instrucciones que hemos visto dadas por otros miembros de la jerarquía, según las de la diócesis de León, siguiendo en ello las dadas por el obispo de Madrid-Alcalá, los párrocos deberían abstenerse de ulte-

(148) 6 de mayo de 1933, "Incautación de cementerios parroquiales", BOE de Burgos, año 76, 15 de mayo de 1933, núm. 7, págs. 101-103.

(149) Ver el apéndice núm. 2.

riores actuaciones hasta no recibir orientaciones de la curia, fundamentalmente se "cuidarian mucho... de no poner acto alguno de los que se mencionan en el artículo 10 del Reglamento, sin recibir instrucciones de esta Curia, que las dará también para los actos sucesivos; y abstenganse, sobre todo, de prestarse, sin la autorización superior debida, a la expropiación de que tratan los artículos 11-19, porque pudieran incurrir en las penas canónicas establecidas en el canon 2347."⁽¹⁵⁰⁾

También debían aguardar las oportunas instrucciones de la curia los parrocos de las diócesis de Tortosa y Coria, según las breves advertencias que hacia el obispado de la primera en su boletín de 15 de mayo de 1933 y que el de Coria pasaria a reproducir a primeros de junio; en estas instrucciones, sin embargo, no se aludia a las penas canónicas apuntadas por las diócesis de Madrid-Alcalá y León.⁽¹⁵¹⁾

Igualmente la circular del obispo de Zamora, Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA, del 15 de mayo de 1933, comunicaba a los parrocos que ante las exigencias de la autoridad ordenando que hicieran entrega de las llaves de los cementerios parroquiales, era deber consignar la protesta, y no iniciar ningún expediente de expropiación en la forma que determinaban los artículos 11 y 13 del reglamento, sin recibir órdenes e instrucciones de la curia.⁽¹⁵²⁾

(150) "Instrucción sobre cementerios parroquiales", BDE de León, 20 de abril de 1933, núm. 7, pág. 179-183. Reproducidas en el BDE de Orense, año 100, 27 de mayo de 1933, núm. 12, págs. 184-187.

(151) s.f., "Advertencias importantes sobre el Reglamento de la Ley de Cementerios y sobre entierros católicos", BDE de Tortosa, año 75, 15 de mayo de 1933, núm. 9, págs. 76-79 y BDE de Coria, año 68, 1 de junio de 1933, núm. 11, págs. 83-85.

(152) 15 de mayo de 1933, "Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de enero de 1932", BDE de Zamora, año 70, 16 de mayo de 1933, núm. 7, págs. 109-124.

En el extremo opuesto a estas recomendaciones a los parrocos se sitúan las del obispado de Oviedo que, dados los tres hitos esenciales que en materia de cementerios parroquiales podían producirse a partir de las disposiciones reglamentarias: incautación, expropiación y tasación, daba una serie de orientaciones a los sacerdotes, a fin de facilitarles "el cumplimiento de su deber"; orientaciones de una gran objetividad y ponderación, sin alusión alguna a penas canónicas, fundamentalmente basadas en actuaciones de carácter jurídico y por las que se les confería una gran libertad de actuación sin sometimiento a normas particulares de la curia. Los completos supuestos de estas normas y su singularidad en el conjunto de las dadas por el episcopado nos lleva a reproducirlas íntegras en el apéndice correspondiente.***

El obispado de Palencia aludiría el 10 de mayo de 1933 únicamente a la voluntariedad de la incautación y a las penas canónicas en que incurrirían quienes la efectuaran completando con estas observaciones las instrucciones dadas el 25 de abril.***

Siguiendo muchos puntos ya recogidos en los distintos documentos que venimos comentando, el administrador apostólico de Mondoñedo y obispo de Lugo, Dr. Rafael BALANZA NAVARRO, dictaba el 18 de mayo una de las circulares más completas del episcopado en la materia que tratamos. En ella señalaba que tenían que darse por no realizados los actos efectuados respecto a incautaciones anteriores a la publicación del reglamento; indicaba que los parrocos

(153) 19 de abril de 1933, "Circular del Provisorato.- Sobre cementerios parroquiales.- Instrucciones relativas al Reglamento publicado en la Gaceta de 12 de Abril", BOE de Oviedo, año 68, 15 de abril- 15 de mayo de 1933, núm. 3, págs. 41-43. Ver el apéndice núm. 4.

(154) 10 de mayo de 1933, "Vicaría General del Obispado", BOE de Palencia, año 83, 15 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 252-253. Ver la nota 136.

habrían de instruir a los ríeles sobre las penas canónicas en que incurrian los que legislaban contra la Iglesia o usurpaban sus bienes; trataba de la influencia que podían ejercer cerca de los concejales católicos de los ayuntamientos; de la documentación a allegar para el caso de la incautación; de la tasación... y un largo etcétera que también nos hace incluirla en el apéndice respectivo.¹¹⁵⁵

En la circular dictada por el vicariato general de Barcelona el 18 de mayo se volvía a hacer hincapié en el carácter voluntario de la incautación, en las penas canónicas y en que los parrocos

"Para no cooperar en lo más mínimo a la incautación, se negarán a entregar las llaves, objetos y libros, y si fuere a ello por la fuerza obligado, hará constar que ni su presencia, ni la entrega de la llave, ni otro cualquier acto ejecutado significan asentimiento a la incautación."

Realizada la incautación darian cuenta, enviando toda la documentación consiguiente, a la curia diocesana, la cual resolvería si procedía o no la práctica de ulteriores diligencias y, siguiendo aquí casi literalmente las instrucciones de los obispos de Madrid-Alcala y de Leon anteriormente comentadas,

"procurarian... no poner acto alguno de los que se mencionan en el artículo 10 del Reglamento sin recibir órdenes e instrucciones de esta Curia, que las dará también para actos sucesivos; y absténganse, sobre todo, de prestarse, sin la autorización superior debida, a la expropiación de que tratan los artículos 11-19, porque pudieran incurrir en las penas canónicas establecidas en el canon 2347."¹¹⁵⁶

(155) 18 de mayo de 1933, "Circular.- Sobre cementerios parroquiales y enterramientos católicos", BOE de Mondoñedo, año 76, 20 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 81-85. Ver el apéndice núm. 5.

(156) 18 de mayo de 1933, "Vicariato General.- Circular sobre incautación y expropiación de cementerios parroquiales", BOE de Barcelona, año 76, 31 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 209-212.

Tanto las breves normas del provisorato de Valencia de 22 de mayo de 1933 como las extensas instrucciones del administrador apostólico de Gerona y obispo de Vich, Dr. Juan PERELLO Y FOU, de 27 de mayo y 22 de junio respectivamente, indicaban que los parrocos "deberan asistir al acto [de incautación] y entregaran a la autoridad municipal la llave del Cementerio", si bien haciendo constar que ni su presencia ni la entrega de la llave podían interpretarse como asentimiento o conformidad con la incautación. (157)

Las orientaciones dadas el 16 de junio de 1933 por el arzobispo de Sevilla, Dr. Eustaquio ILUNDAIN ESTEBAN, insistían -tras reiterar su protesta por la promulgación de la ley y, ahora, del reglamento, que "vulnera derechos imprescriptibles de la Iglesia y lesiona en los fieles derechos cuyo origen es superior a leyes civiles"- en el carácter de voluntariedad de la incautación y en la necesidad de esperar las instrucciones del arzobispado previas a todo acuerdo de expropiación, remitiéndose para todo lo demás al dictamen evacuado por el letrado asesor de la diócesis de Segovia. (158)

Al mismo carácter de voluntariedad se refería la circular que, bajo el título "Sobre la manera de hacer constar la voluntad de ser enterrados católicamente y la anulación de las declaraciones impresas aunque estén firmadas", suscribía el vicario general de la diócesis de Vitoria el 12 de junio de 1933 y en la que, completando las

(157) 22 de mayo de 1933, "Provisorato.- Normas sobre la incautación de cementerios", BOE de Valencia, 1 de junio de 1933, núm. 2172, págs. 194-195 y BOE de Gerona, año 77, 29 de mayo de 1933, núm. 5, págs. 168-173 y 22 de junio de 1933, núm. 6, págs. 249-250.

(158) 16 de junio de 1933, "Arzobispado de Sevilla.- Circular sobre cementerios y enterramientos", BOE de Sevilla, año 76, 20 de junio de 1933, núm. 1227, págs. 162-174.

instrucciones reproducidas del boletín eclesiástico de Palencia, tocaba también el tema de la incautación. Es esta circular uno de los documentos en que con mayor claridad y contundencia se trataba de la posible actitud de los ayuntamientos ante las disposiciones del reglamento, así como el único que ofrecía la colaboración eclesiástica, tanto a los municipios que optaran por construir un nuevo cementerio como a los que adquirieran el parroquial con sometimiento a las leyes canónicas.

"Publicamos ya las normas que los señores Curas han de seguir en caso de incautación del cementerio que conste ciertamente ser de la parroquia, dadas a base de que ni la ley ni el Reglamento imponen⁽¹⁵⁹⁾ a los Ayuntamientos obligación alguna de incautarse de los cementerios parroquiales,⁽¹⁶⁰⁾ ya que solo dicen podrán incautarse,⁽¹⁶¹⁾ de donde se infiere que podrán también no incautarse y optar por hacer un nuevo cementerio o por adquirir, conforme a las leyes canónicas, el cementerio parroquial para que en adelante sea cementerio municipal, pudiendo tener la seguridad los Ayuntamientos que así quieran respetar los derechos sagrados de la Iglesia y no quieran despojarla sacrilegamente de sus bienes, -haciendo al Señor gravísima ofensa que la Iglesia sanciona con la pena máxima de excomunión,- de que han de encontrar en ella toda suerte de facilidades para cumplir sus deberes y evitar responsabilidades."⁽¹⁶²⁾

(159) En negrilla en el original.

(160) En bastardilla en el original.

(161) 12 de junio de 1933, "Sobre la manera de hacer constar la voluntad de ser enterrado católicamente y la anulación de las declaraciones impresas aunque estén firmadas", BOE de Vitoria, año 69, 15 de julio de 1933, núm. 13, págs. 367-369. Reproducido en el boletín eclesiástico de Santiago de Compostela (año 72, 31 de agosto de 1933, núm. 2702, págs. 354-356). El boletín de Vitoria, al efectuar la publicación del reglamento a primeros de junio, la había encabezado con el siguiente comentario: "En la 'Gaceta' del 12 de abril del corriente año se publicó este Reglamento que, como la ley a que se refiere, contiene manifiestas violaciones de los derechos sacratismos de la Santa Iglesia. Con nuestra firme protesta por ellas lo insertamos a continuación porque su conocimiento interesa a Sacerdotes y fieles". "Reglamento para la aplicación de la ley de cementerios", BOE de Vitoria, año 69, 1 de junio de 1933, núm. 12, págs. 298 y ss.

Por ultimo y tras esta detenida enumeración, cuyo proposito ha sido el de recoger las disparidades contenidas en las diversas instrucciones dadas a los curas parrocos por la jerarquia, queremos aludir a unas "Cuestiones pastorales ante las nuevas leyes civiles" publicadas por el Boletín diocesano de Iuj de 20 de septiembre de 1933. En ellas se volvía a insistir, con un extenso comentario, en el caracter voluntario de la incautación y en las penas canonicas en que incurrirían quienes la realizaran, así como en que los parrocos deberían esperar las instrucciones del prelado sin adelantarse a fijar la indemnización ni siquiera "a tratar sobre ella", tal como hemos visto indicado en la mayoría de los documentos analizados, pero también señalaba que "Los parrocos solo ante la violencia o amenazas de sanciones por la autoridad civil pueden entregar los cementerios parroquiales"⁽¹⁶²⁾, advertencia esta que, como hemos puesto de manifiesto, si bien coincidía con las instrucciones de algunos de los prelados, era claramente divergente de la mansedumbre que otros, como el arzobispo de Burgos, recomendaban, siempre y cuando, claro está, quedara manifestada la protesta por la lesión de los derechos de la Iglesia y la reserva del ejercicio de estos.

Como hemos indicado al tratar de la ley de 30 de enero de 1932, no tenemos datos sobre las incautaciones realizadas por las autoridades municipales, ni como consecuencia de ella ni a raíz de la publicación del reglamento. Sobre la actitud asumida por dichas autoridades a partir de este no parece ruera muy conciliadora a juzgar por los escasos ejemplos de que disponemos.⁽¹⁶³⁾

(162) s.t., "Cuestiones Pastorales ante las nuevas leyes civiles", BDE de Iuj, año 78, 20 de septiembre de 1933, núm. 12, págs. 217-219.

(163) Así, ya el 20 de abril el alcalde de Baracaldo se apresuró a incautarse del cementerio parroquial del barrio de Luchana, según una noticia que describía los hechos en estos términos: "El alcalde de Baracaldo, con gran aparato de acompañamiento, se presentó en el cementerio parroquial del barrio de Luchana

La indudable actividad incautatoria desplegada por los ayuntamientos fue la causa de que, como ya hemos apuntado, la conferencia de metropolitanos de 1933 se centrara, en cuestión de secularización de cementerios, exclusivamente en este tema, siendo el punto propuesto para debatir en las conferencias de sufraganeos preparatorias de aquella el de si por parte de la Iglesia -es decir de los

y reclamó al párroco la entrega inmediata del cementerio, a lo que se negó aquel, por ser propiedad de la parroquia desde tiempo inmemorial, como atestiguan los documentos. Entonces el alcalde ordenó a un cerrajero, que llevaba en previsión, que abriera las puertas y penetró violentamente en el sagrado recinto, donde hace más de veinte años que no se verifican entierros. El párroco protestó de la violencia del acto y se levanta acta notarial. El Ayuntamiento ha tomado como pretexto para proceder a la incautación de dicho cementerio la necesidad de ocupar los terrenos para destinarlos a jardines públicos. El asunto será llevado por la Iglesia ante los tribunales de Justicia." ("El Debate", 21 de abril de 1933).

Otro caso se dió en Oleiros (La Coruña) donde el párroco llegó a ser encarcelado: "Para las cinco de la tarde del pasado lunes, se había fijado la incautación del cementerio parroquial de Serantes, en el Ayuntamiento de Oleiros, y como pasara el tiempo sin que el Ayuntamiento se presentase, el párroco se retiró. Momentos después llegaron el alcalde y el secretario y tocaron las campanas a rebato. Acudieron los vecinos, que protestaron contra el acto que se iba a realizar, y manifestaron que el cementerio era suyo y no del párroco ni del Ayuntamiento. El alcalde, ante esto, no realizó la incautación, pero esta mañana dió orden de que fuera detenido el párroco como promotor del incidente, lo que no es cierto. La Guardia Civil detuvo al párroco: más en vista de la actitud del vecindario, le permitió que se presentase voluntariamente en el Ayuntamiento de Oleiros. Así lo hizo el párroco, pero como no encontraba al alcalde, continuó hasta la capital, donde se presentó al gobernador civil, el cual, no muy correctamente, ordenó al sacerdote que se presentase al Juzgado, donde el Juez le manifestó que no tomaba ninguna determinación contra él, porque no tenía ninguna noticia del asunto. El párroco, entonces, marchó al periódico "El Ideal Gallego", para dar cuenta de lo que sucedía, y al salir fue detenido por la Guardia Civil y conducido a la cárcel." ("El Debate", 25 de mayo de 1933).

También de Galicia es el último ejemplo que recogemos, cuya noticia, quizá por tratarse de un periódico ajeno a los intereses del que hemos reseñado anteriormente, encierra un distinto cariz: "Cuando las autoridades municipales trataban de incautarse del cementerio de Labeiros (Pontevedra), el cura párroco tocó, o mandó tocar, a rebato las campanas para reunir al pueblo, parte del cual se amotinó contra dichas autoridades, que por tal motivo no pudieron llevar a cabo la incautación.

Dicho párroco había excitado anteriormente los ánimos de los feligreses exponiendo que la autoridad civil iba a incautarse del cementerio y que más tarde lo haría también de la iglesia y de los propios feligreses." ("El Sol", 3 de agosto de 1933).

párrocos afectados en cada caso- debía aceptarse o no la indemnización que ofrecieran los ayuntamientos por los cementerios católicos de que se incautaran.

El acta final de la conferencia, que tuvo lugar los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de octubre, concluyó que:

"En general no procede aceptar la indemnización consiguiente a la incautación de Cementerios u otras propiedades de la Iglesia, no destinadas al culto, para no perder definitivamente todo derecho a su propiedad, ni causar escándalo a los fieles. En el supuesto de que fueran cementerios o propiedades de valor considerable, a juicio del respectivo Prelado, podrían aceptarse, previas las protestas y formalidades de rigor."****

A esta, llamemos, "económicamente ecléctica" solución llegaron los metropolitanos en base a las divergentes propuestas efectuadas por las distintas conferencias provinciales.

Así, la de Tarragona, reunida el 21 de septiembre de 1933 propondría que dependería de las circunstancias del caso la conveniencia de aceptar o no la indemnización, decantándose, no obstante, por no aceptarla como regla general, basada también y principalmente en una cuestión económica:

"En general es preferible no aceptar, porque los precios que se fijan serán insignificantes, y en cambio la Iglesia perderá definitivamente todo derecho de propiedad respecto del Cementerio cedido."*****

La de Burgos, por su parte, considero que si procedía aceptar la indemnización ofrecida, proponiendo determinados requisitos para su fijación, requisitos que no dejaban de

(164) *Església i Estat durant la segona...* IV, pág. 68.

(165) *Op. cit.* III, pág. 999.

ser paradójicos, por cuanto entendia, muy alejada de lo establecido en la nueva normativa de la Republica, que la incautación podia realizarse solo sobre la posesion, cuando esta se determinaba, precisamente, sobre la propiedad.:

"12. Reconocer y declarar que el Cementerio católico, de cuya incautación se trata, pertenece a la Iglesia.- 24. Que, por tal razon, la incautación que sobre el mismo se lleva a cabo solo transferira al Ayuntamiento la administracion y facultad para el cambio de titulo del Cementerio Parroquial en Cementerio Municipal, que la Ley secularizadora dispone ha de llevar en lo sucesivo; pero no derecho alguno de propiedad ni de otra indole, fuera de los indicados.- 32. Que como indemnización a la iglesia, por privarla del disirute, posesion y administracion del Cementerio parroquial, el Ayuntamiento abonara la cantidad que de mutuo acuerdo se fija entre el mismo Ayuntamiento y el Señor Parroco, a saber...- 42. Que, si a consecuencia de nuevas disposiciones legales, se reintegrara a la Parroquia el disirute y administracion del Cementerio incautado, esta devolverá al Ayuntamiento la cantidad percibida como indemnización, deduciendo de ella la parte correspondiente al tiempo que durare la incautación."''''

La provincia compostelana, al estar vacantes las diócesis de Santiago y Mondonedo envio al cardenal VIDAL, por medio del obispo de Oviedo, los pareceres individuales de los sufraganeos, concretamente de los de Urense y Iuy. El primero de los cuales se decantaba porque no se aceptara, con caracter general, la indemnización, salvo que la cantidad propuesta remunerara justamente el inmueble y el segundo, contrariamente, por aceptar la indemnización, a no ser que a la Iglesia le interesara conservar el cementerio en cuestion por determinadas razones.'''''

(166) Op. cit., IV, pag. 93.

(167) Op. cit., IV, págs. 99 y 101.

Los prelados hispalenses fueron los más claramente contundentes, decantándose sin paliativos por la aceptación de la indemnización:

"Procede aceptar la indemnización que se ofrezca por los Cementerios y por otros bienes pertenecientes a la Iglesia, con tal que no sean edificios destinados al culto divino." (168)

De parecer diametralmente opuesto sería, sin embargo, la conferencia de la provincia toletana que se pronunciaría por el rechazo de la indemnización en base a los mismos motivos que ya hemos visto arguidos por los prelados que se pronunciaban por tal postura:

"...como regla general, no debe aceptarse la indemnización; pues, aparte de que los ofrecimientos suelen ser mezquinos y a veces irrisorios, la aceptación supone aquiescencia y corta el paso a las reclamaciones que podrían hacerse en mejores circunstancias." (169)

Los prelados valencianos, por su parte, serían favorables a la aceptación:

"Impuesta a la fuerza la incautación, parece natural aceptar la indemnización." (170)

La conferencia episcopal vallisoletana fue la que aportó la sugerencia que, aunque de confusa redacción, más se acercaría al acuerdo final adoptado por los metropolitanos, basado en el distinto valor económico que pudieran tener los cementerios:

"Puede servir, tratándose de cementerios de poco valor, la norma de no proceder por ahora (ya que el Reglamento no señala plazo) a la reivindicación y consiguiente expropiación, porque de otro modo

(168) Op. cit., IV, pág. 105.

(169) Op. cit. IV., pág. 111.

(170) Op. cit., IV, pág. 117.

pierde eficacia la protesta y son muchos los gastos que se ocasionan. En cuanto a cementerios incautados de mucho valor, acudase pidiendo normas al Excmo. Sr. Nuncio o a la Santa Sede en cada caso." (171)

La cesaragustana, por ultimo, se decidio por recomendar la no aceptacion:

"Aceptar estas indemnizaciones parece conformarse con la ley; no aceptandolas se pierden tales indemnizaciones, cuyo pago sera siempre muy dudoso; asi es que se opta por la no aceptacion y el silencio." (172)

Para finalizar el tema relativo a las incautaciones de cementerios parroquiales queremos referirnos al unico documento colectivo que, con independencia de las irases del cardenal SEGURA ya apuntadas, trato de este tema en el periodo analizado. Este fue la "Declaracion del Episcopado con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas" de 25 de mayo de 1933, en cuya introduccion se protestaba por las incautaciones ilegales realizadas por parte de la autoridad civil:

"Los cementerios eclesiasticos, que la Iglesia habia construido en gran numero con fondos propios y que forman parte integrante de su patrimonio cultural, han sido violados, y se procedio a su incautacion laica, sin aguardar siquiera la reglamentacion del propio Estado, con la que se debian establecer las indispensables normas procesales. Ni a los objetos sagrados y simbolos religiosos se ha tenido con frecuencia el mas elemental respeto, especialmente a las capillas de dichos cementerios, cuya desafeccion como santos lugares de culto esta sometida en todo caso a la jurisdiccion eclesiastica." (173)

(171) Op. cit., IV, pag. 123.

(172) Op. cit., IV, pag. 126.

(173) Reproducirnos integro este documento en el apendice sobre ordenes y congregaciones religiosas.

4. Los cementerios privados.- Cuestiones planteadas respecto de los de las comunidades religiosas. Obispos y arzobispos de Tui, Astorga, Avila, Tarragona, Barcelona, Segovia, León, Tarazona (administración apostólica de Tudela), Sevilla y Santiago de Compostela.

Una de las cuestiones que más determinaría que se pusiera de manifiesto la falta de uniformidad en los criterios que informaban las instrucciones dictadas por los distintos miembros de la jerarquía, sería la regulación legal sobre los cementerios privados, regulación que, pese a las dudas que planteaba, nunca mereció una interpretación aclaratoria por parte del gobierno, ya que, incluso, ni el mismo reglamento de aplicación de la ley de 30 de enero de 1932, se ocupó, como cabía esperar, de clarificar en su articulado las ambigüedades de la ley en esta materia.

La oscuridad en la redacción de la ley fue puesta inmediatamente de manifiesto por el Dr. Félix BILBAO, obispo de Iortosa, en la carta que escribiera al cardenal VIDAL el 22 de febrero de 1932.

"Ante todo, yo creo que en la Ley publicada en la Gaceta hay una equivocación, evidente si se lee con atención el texto. En el art. 32, en que prohíbe los enterramientos en los templos, casas religiosas y en los locales anejos a unos y otras, añade: salvo lo dispuesto en el art. 12. En ese artículo 12 no hay nada que pueda considerarse como limitación del 32; en cambio el art. 22 quedaría casi sin efecto, de no entenderse este 32 en relación con el. Se ve, pues, que debe leerse: salvo lo dispuesto en el art. 22. No sé que se haya rectificado eso, pero entendido en absoluto el art. 32 por muchos Ayuntamientos, molestan a las monjas de clausura, obligándolas a enterrar en los cementerios comunes a sus difuntas."

Y, para evitar en lo posible los atropellos de las autoridades municipales, sugería al cardenal la conveniencia de conocer el criterio del gobernador de la provincia en ese extremo "porque, siendo este el razonable que se supone, podríamos defender a curas y monjas de los ataques de alcaldadas mas o menos bruscas". Junto a esta sugerencia también le informaba que el gobernador civil de Castellón, en un caso ocurrido sobre enterramiento de una monja, había dispuesto que se hiciera en el cementerio general "pero, habiéndole teleografiado dirigiéndole expresivo ruego y fundándome en la ley, conseguí se autorizase el enterramiento en el cementerio de las monjas."⁽¹⁷⁴⁾

Esta discutible sugerencia del dr. Félix BILBAO fue recogida, como mas adelante veremos, en las "Breves anotaciones a la ley de secularización de cementerios" publicadas por el boletín eclesiástico de Tarragona, mientras que en otras normas del episcopado se entendió como válida la referencia de la ley al artículo primero.

Así haría el Dr. Antonio GARCÍA y GARCÍA, obispo de Tuv, que, al referirse en su pastoral de 24 de febrero de 1932 a los cementerios de religiosas y tras puntualizar que nunca debería entenderse, como, al parecer, algunos ayuntamientos habían hecho, pretendiendo intervenir en su administración, que los cementerios parroquiales eran cementerios privados, pasaba a desarrollar el contenido del artículo tercero de la ley, sobre el que indicaba que, en parte, coincidía con las disposiciones de la Iglesia, la cual, en el canon 1.205, § 2, determinaba que en las iglesias no se sepultaran los cadáveres, salvo los de los obispos residenciales, abades y prelados nullius, etc. pero que, también en parte, se oponía a tales disposiciones, por cuanto el canon 1.208 puntualizaba que los religiosos

(174) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, págs. 583-584, nota 42.

exentos podían tener cementerio propio distinto del comun.

Hechas estas consideraciones, el prelado indicaba a las religiosas de clausura que, en adelante, tendrían que atenerse a las disposiciones de la nueva ley y renunciar, por tanto, al privilegio de tener un cementerio independiente.

"Las Religiosas de clausura tengan presente este artículo 32 de la Ley de secularización de cementerios, porque, aunque sea violación del derecho que ellas tienen concedido por la Iglesia, prácticamente han de someterse a la disposición civil. Doloroso ha de serles; pero hoy por hoy no puede procederse de otro modo. Oren y oíreznos al Señor sacrificios y penitencias para que Su Divina Majestad se apiade de nosotros y conceda días mejores y más tranquilos a su Iglesia en España. Sin embargo en cada caso que se presente, recurran a este Obispado para recibir instrucciones."

Esta misma interpretación se daba en las "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de cementerios" publicadas el 1 de marzo de 1932 en el boletín eclesiástico de la diócesis de Astorga, notas en las que, también con una interpretación más adecuada de la ley, se mantenía igualmente un criterio totalmente divergente al del obispo de Tortosa.

De esta forma, tras señalar, refiriéndose a los cementerios municipales, que en ellos habían de ser inhumados "todos los que fallezcan dentro del término del Municipio o a él sean trasladados, aun las monjas y los privados canónicamente de sepultura eclesiástica, salvo lo dispuesto en el artículo 22 acerca de los cementerios de

(175) 24 de febrero de 1932, "Instrucción Pastoral acerca de los Cementerios y protesta razonada contra la secularización de los mismos", BDE de Tuy, año 73, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 71-90.

carácter privado", añadía:

" II
En el artículo segundo trata la ley de los cementerios de carácter privado,⁽¹⁷⁶⁾ que son los que, *construidos fuera*⁽¹⁷⁶⁾ del cementerio común (*municipal o parroquial*),⁽¹⁷⁶⁾ pertenecen a colectividades, familias o individuos a quienes se ha concedido el privilegio de tener cementerio propio.

"De donde se deduce que no son cementerios de carácter privado:

- a) Los panteones o nichos adquiridos en propiedad dentro del cementerio común, sea este *parroquial o municipal*,⁽¹⁷⁶⁾ por las personas morales, las familias o los particulares.
- b) Ni los cementerios parroquiales;⁽¹⁷⁶⁾
- c) Ni los cementerios municipales;⁽¹⁷⁶⁾ y
- d) Ni cualquier otro que preste servicio de cementerio general. Por consiguiente, ninguna de las disposiciones contenidas en este artículo 2º puede aplicarse a los cementerios parroquiales.⁽¹⁷⁶⁾

III

"El artículo 3º de esta ley prohíbe las inhumaciones en los templos o en sus criptas, en las casas religiosas o en los locales anejos a unos y a otras, *salvo lo dispuesto en el artículo 1º*,⁽¹⁷⁶⁾ es decir, salvo el caso de que no haya en la localidad cementerio *municipal*,⁽¹⁷⁶⁾ o de que no se haya realizado *legalmente*⁽¹⁷⁶⁾ la incautación del *parroquial*.⁽¹⁷⁶⁾

"Por lo tanto, las monjas, según esta ley, deben ser enterradas:

- "a) En el cementerio *municipal*,⁽¹⁷⁶⁾ si lo hay;
- "b) En el *parroquial*,⁽¹⁷⁶⁾ si de él se ha incautado *debidamente*⁽¹⁷⁶⁾ el Municipio; y
- "c) En el cementerio de sus conventos, como hasta ahora, si no hay cementerio *municipal*⁽¹⁷⁶⁾ ni se ha llevado a cabo *legalmente*⁽¹⁷⁶⁾ la incautación del *parroquial*.⁽¹⁷⁶⁾⁽¹⁷⁷⁾

(176) En bastardilla en el original.

(177) s.f. "Breves notas aclaratorias a la nueva ley de cementerios", BOE de Astorga, año 80, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 81-89.

Esta misma línea de interpretación era la seguida en la "Circular dando instrucciones sobre cementerios y enterramientos" firmada el 5 de marzo por el Dr. Enrique PLA Y DENIEL, obispo de Avila, señalando que:

"El artículo 34 de la nueva Ley civil establece que en ningún caso será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas, ni en las casas religiosas o en los locales anejos a unas y otras, salvo lo dispuesto en el artículo 19. En adelante no podrán por tanto las religiosas de clausura ser enterradas dentro de la misma y por tanto no se podrá autorizar tampoco la entrada de nadie dentro de clausura con motivo de la muerte de una religiosa, sino que se debiera observar lo que dispone el canon 1.229 § 5 del Código de Derecho Canónico: "A las religiosas y novicias, que hayan fallecido en el convento, llevenlas otras religiosas hasta el límite de la clausura; y desde allí, si se trata de religiosas no sujetas a la jurisdicción del parroco las acompaña a la propia iglesia u oratorio de la casa religiosa el capellán quien hace también las exequias". Nótese que el Código dice el capellán y no el confesor como en muchos conventos lo hacía hasta ahora al enterrarse dentro de clausura. Contra lo dispuesto por los sagrados cánones, estaban ya en España por anteriores leyes civiles prohibidas las exequias de cuerpo presente en las iglesias; pero es de suponer que nadie se opondrá a que se celebre la Misa exequial estando el cadáver de la religiosa en el coro, no en el cuerpo de la iglesia, y por tanto trasladese el cadáver de la monja difunta por las religiosas al coro para este fin."

Pero, como ya hemos indicado, esta interpretación estricta de la ley no era la seguida en las "Breves anotaciones a la ley de secularización de cementerios" que, con fecha 5 de marzo, publicaba el boletín eclesiástico de Tarragona y en las que se daba una versión muy benigna del contenido del precepto legal:

"Por el artículo 24 se respetan los cementerios privados hoy existentes. Tales son los de las

(178) 5 de marzo de 1932, "Circular dando instrucciones sobre cementerios y enterramientos", BUE de Avila, año 43, 11 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 97-102.

religiosas de clausura y algunas sepulturas que se conservan en determinadas iglesias. La ley respeta los derechos adquiridos de sepelio en aquellos cementerios y sepulturas. Por esto ordena la revision de derechos establecidos y que se formen listas de las personas que puedan alegarlos. Interesa, pues, que los capellanes de religiosas de clausura y los parrocos que tuvieren en sus curatos o iglesias algun cementerio privado o sepultura en que se verificasen inhumaciones con arreglo a la legislacion vigente hasta ahora, se pongan en relacion con los Sres. Alcaldes, al objeto de que se incluyan en las listas referidas todas aquellas personas que a ello tuvieren derecho.

"Interesa asimismo que los cementerios privados y las sepulturas se mantengan en las debidas condiciones; de otra suerte, corren el riesgo de que se ordene su clausura, aplicandoseles el ultimo parrafo del articulo 22.

"Confirma el respeto de la ley a los derechos adquiridos el articulo 34, al establecer que en ningun caso sera permitida la inhumacion en los templos o en sus criptas, ni en las casas religiosas ni en los locales anejos a unos y otras, salvo lo dispuesto en el articulo 12, dice el texto, aunque seguramente por error material, ya que se ha de referir al articulo 34, que es el que trata del derecho que se tenia a estas inhumaciones, y el articulo 12 nada dispone referente a las mismas. Se hallaba ya promulgada la ley, pero todavia no estaba vigente, cuando fallecio el Excmo. Señor Obispo de Cadiz,... y el Sr. Ministro de la Gobernacion autorizo su sepelio en la iglesia Catedral, reconociéndole el derecho que como a Obispo le concedian las leyes anteriores."

A la vista de estas frases cabe preguntarse hasta que punto era adecuada la referencia al enterramiento del obispo de Cadiz, toda vez que el mismo no tenia significacion alguna, ni respecto al texto legal ni respecto a una posible benevolencia por parte del gobierno en la interpretacion del

(179) s.f. "Ley dictando reglas relativas a los Cementerios municipales", BOE de Iarragone, año 42, 5 de marzo de 1932, núm. 31, págs. 578-581, también en *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, págs. 583-587.

mismo, pues no era mas que el resultado de la aplicación de los preceptos del Código civil en cuanto a la "vacatio legis" y, por tanto, a la entrada en vigor de la nueva norma. La ley de secularización de cementerios, al no ser aun de aplicación el 15 de febrero de 1932, fecha en que habia fallecido el Dr. Marcial LOPEZ CRIADO, no habia derogado la legislación anterior que era, por tanto, la unica aplicable en ese momento.

Todo ello parece responder a un error de interpretación del cardenal VIDAL, el cual se pone de manifiesto en la contestación dada a la carta que le enviara el obispo de Segorbe, Pray Luis AMIGO FERRER, proponiendole que interesara del presidente de la Republica o del ministro de Justicia la autorización para poder ser enterrado en la iglesia del orfanato de Masamagrel, fundada por el y a la que ya habian sido trasladados los restos de sus padres. El cardenal le contestaba el 2 de marzo que el ejemplo del obispo de Cadiz hacia prever que no seria "cosa difícil conseguir en cada caso la conveniente autorización para la sepultura dentro de la Catedral o en otra iglesia, maxime si se puede alegar ya derechos adquiridos, como en el caso de y." (180)

Mención expresa al enterramiento de obispos se hacia, aunque sin matización alguna, en la "Instrucción sobre cremación de cadaveres, cementerios y enterramientos" del obispo de Barcelona, Dr. Manuel IRURITA ALMANDOZ, de 8 de marzo de 1932, instrucción que, separandose de la línea que mantenía su arzobispo, daba por valida, al igual que habia hecho el obispo de Avila, la referencia que el artículo tercero de la ley hacia al primero. De esta forma, tras transcribir el citado artículo tercero, señalaba que

(180) *Església i Estat durant la segona...*, II, pág. 506, nota 45.

"Esta disposición, parte coincide con la ley de la iglesia contenida en el Canon 1205, 2, que ordena que en las iglesias no sean sepultados los cadáveres, exceptuando los de los Obispos residenciales, Abades y Prelados...; pero en parte se opone a la ley de la Iglesia y especialmente al párrafo segundo del Canon 1208, que dice: "Los religiosos exentos pueden tener cementerio propio distinto del cementerio común."

En esta última frase esta clara la interpretación literal de la ley hecha por el Dr. IRURITA, sin embargo no encierra la misma claridad su alusión al enterramiento de obispos, abades, preladados..., ya que la ley no hacía salvedad alguna ni señalaba la posibilidad de que ciertos cargos eclesiásticos pudieran ser enterrados en los templos: de ahí que no sea muy acertada la comparación entre las dos normas hecha por el obispo de Barcelona, el cual acababa señalando concisa y simplemente que para la aplicación del artículo tercero, "el camino mas seguro es acudir en cada caso que se presente al Ordinario para recibir instrucciones."⁽⁸¹⁾

No deja de ser curiosa la interpretación que daría a la ley el obispo de Segovia, Dr. Luciano PEREZ PLATERO, al comenzar señalando en su escrito "Sobre la secularización de cementerios" de 15 de marzo de 1932, que según el artículo segundo de la ley los cementerios de las comunidades religiosas reunían todos los requisitos para ser considerados cementerios privados y, por tanto, debían ser respetados como tales, pero, dicho esto y justificando su seguida argumentación únicamente en la desconfianza ante la legislación civil, pasaba a dar normas contrarias a tal planteamiento, normas que, en realidad, respondían a la interpretación literal de la ley y que, en lo tocante a las

(81) 8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120. Reproducido por el BOE de Mallorca, año 72, 31 de marzo de 1932, núm. 8, págs. 172-184.

exequias de las religiosas, daban similares directrices que las del Dr. FLA Y DANIEL.

"Aunque los cementerios, algunos cuando menos, que tienen ciertas Comunidades religiosas para su uso particular, presenten a las claras la condicion de caracter privado a los efectos del art. 24 de la ley, y por tanto deban considerarse respetados por el legislador, siquiera para los actuales religiosos, mucho nos tememos que no suceda asi; y en tal caso conviene que dichas Comunidades vean de adquirir un lugar reservado en el cementerio publico, donde reposen juntos los que trabajaron juntos en su santificacion.

"Por lo pronto, los religiosos y religiosas de clausura no podran ser enterrados en sus conventos, ni lugares anejos, segun lo preceptuado en el art. 34 de la ley; sino que deberan resignarse a abandonar su aislamiento para ir al cementerio comun, en el cual procuren proveerse de un trozo adecuado, segun lo que acabamos de decir.

"En adelante, pues, todos deben observar lo dispuesto en el canon 1230, § 5 que dice: "Las religiosas y novicias, fallecidas en el convento, seran conducidas por otras religiosas hasta la puerta de la clausura; desde alli, tratandose de religiosas no sujetas a la jurisdiccion del parroco, las acompaña al oratorio o iglesia propia del convento el capellan, al cual toca tambien hacer las exequias". Formando el coro un recinto separado e independiente de la iglesia, alli podra y debiera quedarse el cadaver durante la Misa exequial, no obstante el estar prohibidos de atras los funerales de cuerpo presente en las iglesias."

Muy laconica, y respondiendo a la que podemos llamar la interpretacion "benigna" de las nuevas normas, era la referencia que en las "Acotaciones a la Ley de cementerios", publicaba el boletin eclesiastico de Leon de 31 de marzo de 1932, limitandose a consignar en ella, siguiendo la interpretacion tarraconense, el supuesto error de remision al articulo primero que contenia el tercero, y sin hacer,

(182) 15 de marzo de 1932, "Sobre la secularización de cementerios", BOE de Segovia, año 77, 13 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 109-115.

por tanto, comentario alguno a la problemática que pudiera plantearse en el caso de los cementerios de las comunidades religiosas.

"Cementerios privados.- Son los construidos por personas o entidades particulares. Nada sobre ellos decimos por no ser de aplicación práctica para los Reverendos Sres. Curas. Parece ser que la salvedad a la prohibición que establece el artículo 24 de esta ley debe referirse, no al artículo primero (como indica) sino al 24, toda vez que este artículo 24, y no el 14, es el que guarda relación con tal salvedad." ¹⁸³

También seguía esta favorable interpretación el Dr. Isidro GOMA en su pastoral "El laicismo postumo", en la que incluso hacía la misma alusión al ejemplo del sepelio del obispo de Cádiz que hemos visto citado en el boletín eclesiástico de Iaragona. Pero esta referencia del obispo de Iaragona, si bien mejor traída que la del comentarista tarraconense por cuanto suponía la nueva ley en vigor y, por tanto, la actitud de las autoridades favorable a los derechos adquiridos antes de ella, adolecía en este caso del error de no percatarse de que la norma secularizadora aun no estaba vigente, debiendo así efectuarse los sepelios, como ya hemos indicado, a tenor de lo establecido en la legislación anterior, y, de ahí, que lo que se considerase irónicamente como ventajas concedidas por el artículo 24 de la ley -y que llegaba a hacer extensivas a todos los fieles que tuvieran los derechos a que dicho artículo se refería, no solo a los religiosos, como hasta ahora hemos visto- fuera, cuando menos y según vamos viendo por la distinta postura del episcopado, dudosa; razón, quizá, por la que, curándose en salud, aconsejaba, en primer lugar, el reconocimiento de los derechos por la autoridad municipal y en segundo término, y por si acaso la resolución de dicha autoridad no fuera favorable, solo aseguraba el carácter de

(183) 31 de marzo de 1932, "Anotaciones a la Ley de cementerios", BOE de León, 31 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 112-118.

cementerios privados para los de las religiosas que estuvieran independientes y contruidos con todos los requisitos legales.

"...coincide lo dispuesto en este artículo 3º con el criterio restrictivo de la Iglesia en punto a enterramientos en los templos; es contrario al derecho eclesiástico, que consiente a los religiosos exentos tener cementerio propio y autoriza a los Ordinarios para que concedan a personas morales o familias particulares sepultura separada del cementerio general. Por declaración posterior a la ley, con motivo de la sepultura del Excmo. Sr. Obispo de Cadiz... parece se respetarán los derechos adquiridos en este particular. Esto nos persuade que la referencia que este artículo 3º hace al 1º... es error material y que la alusión es al 2º, en que se habla de los derechos adquiridos de sepultura en cementerios privados.

«Por lo mismo, cualesquiera personas morales o físicas, una familia, asociación, casa de religión, que haya gozado hasta el presente de derecho de enterramiento en cementerio o sepultura privados, creemos puede seguir como hasta ahora, a lo menos por lo que atañe a los derechos adquiridos. Aconsejamos, pues, a cuantos se hallen en estas circunstancias, especialmente a las casas religiosas, se acojan a los beneficios llamemoslos así: del art. 2º, interesándose ante la autoridad municipal para que se les reconozcan tales derechos.

«Y cuando no quisieran incluirse toda clase de sepulturas privadas en la clasificación que se hace en el artículo 3º, creemos, para los efectos del art. 2º, que está fuera de duda que deben considerarse cementerios privados los de aquellas casas religiosas- los hay en estas diócesis- que los tienen no en el interior, ni siquiera en locales anejos a la casa, sino convenientemente separados, contruidos de acuerdo con la autoridad y con arreglo a las disposiciones vigentes... Las personas que hayan adquirido derecho de enterramiento en tales cementerios procurarán vindicarlos en la forma autorizada por el mismo Decreto (sic) de secularización en su artículo 2º. Para ello, si alguna duda se ofreciere podrán

pedir instrucciones a esta Curia."***

Otro prelado que, a diferencia del Dr. GOMA, seguiría la interpretación estricta de la ley, sería el arzobispo de Sevilla, cardenal ILUNDAIN, separándose, por tanto también de la del arzobispo de Tarragona. Sin entrar a dilucidar las cuestiones de interpretación planteadas por la norma, se limitaba a indicar a las comunidades religiosas la necesidad de efectuar los trámites necesarios para asegurarse un enterramiento digno en el cementerio general.

"Las Comunidades religiosas que han tenido cementerios o criptas en sus conventos, resignense a tener que proveerse, en la forma que cada Comunidad pueda, algun panteón reservado en el cementerio publico, para sepultar en el los cadáveres de los que fallezcan en lo sucesivo. Asi evitaran la amargura de ver enterrados los cadáveres de sus hermanos en religion, acaso junto a los de aquellos que la Iglesia no quiere sean enterrados en el mismo lugar que sus buenos hijos." (184)

Esta misma linea era, por ultimo, la contenida en los "Avisos a los Encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales" publicados en el boletín eclesiástico de la diócesis de Santiago el 16 de abril de 1932. En el se aludía, de forma escueta, a la finalización del privilegio de las comunidades religiosas de tener cementerios propios.

"Las religiosas de clausura han de tener muy presente lo que se dispone en el art. 32, que forzosamente habrá de cumplirse; aunque, en cada

(184) 30 de marzo de 1932, "El Laicismo postumo,- Instrucción pastoral sobre cementerios y sepulturas", BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 704, págs. 207-239.

(185) 6 de marzo de 1932, "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles", BOE de Sevilla, año 75, 7 de marzo de 1932, núm. 1201, págs. 92-97 recogida y hecha suya por el obispo de Tenerife, Dr. Albino GONZÁLEZ MENÉNDEZ-REIGADA y reproducida en el BOE de Tenerife de 1932, marzo y abril, núm. 3 y 4, págs. 37-44.

caso, deberán recurrir al Ordinario para recibir instrucciones."***

tal como se desprende de las directrices que hemos recogido, la postura de la jerarquía española era muy diversa respecto a la cuestión de los cementerios privados, diversidad que ponía de manifiesto, una vez más, la falta de uniformidad en su criterio y una línea de actuación común frente a la legislación secularizadora.

Dicha diversidad llegó incluso a evidenciarse en los cambios de postura que, a la vista de las interpretaciones dadas por otros miembros del episcopado, se dieron en algunas diócesis, como sucedería en el caso de la de Avila, que rectificaba el contenido de la circular del Dr. PLA Y BENIEL de 5 de marzo en un sueto publicado en el boletín eclesiástico del 30 de abril y en el que, aun con mucha cautela y supeditando la actitud a adoptar por las religiosas -como había aconsejado el Dr. GOMA para todos los casos- al consentimiento previo de la autoridad civil en cada localidad, pasaba a apuntarse la posibilidad del error material contenido en la ley:

"¿Pueden considerarse los cementerios de las religiosas de clausura como privados y autorizados por el art. 2º de la nueva ley de cementerios/.

«Es cierto que contraponiéndose los cementerios privados a los generales, los cementerios de las religiosas de clausura son privados y en este sentido pueden considerarse incluidos en el art. 2º de la Ley sobre cementerios de 30 de enero de 1932. No es menos cierto que el artículo 3º de esa ley dice: "En ningún caso será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas ni en las casas religiosas ni en los anejos a unos y a otras, salvo lo dispuesto en el artículo 1º." Sin embargo como no tiene ningún sentido esta salvedad

(186) s.t., "Avisos a los encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales", BOE de Santiago de Compostela, año 61, 16 de abril de 1932, núm. 2672, págs. 76-77.

que se hace en el art. 32 "salvo lo dispuesto en el art. 12", creen algunos que debe haber un error material en la publicación de la ley y que donde dice "salvo lo dispuesto en el art. 12" debería decir "salvo lo dispuesto en el art. 22". Si hubiese habido este error, podrían entonces considerarse autorizados los cementerios de las religiosas de clausura para ellas, aun cuando no para otras personas. En algunas localidades las autoridades lo han continuado así autorizando, aun cuando no en otras. Donde las autoridades lo autoricen, canónicamente podría seguir haciéndose todo como antes en el entierro de las religiosas de clausura. Es posible que algun día se dicte una disposición que aclare y fije el sentido de la ley civil.⁽¹⁸⁷⁾

Los peligros derivados de esta falta de uniformidad fueron puestos de manifiesto al cardenal VIDAL por quien, como acabamos de ver, los había sufrido en su propia diócesis, el Dr. PLA Y DENIEL, y también por el vicario general de Vitoria, Dr. Justo ECHEGUREN.

La carta que el primero enviaba al arzobispo de Tarragona el 1 de abril de 1932 es reveladora tanto del seguimiento que unos prelados hacían de los documentos de otros -lo cual, por otra parte, es lógico tratándose de los del arzobispo de Tarragona- como de la evolución de la postura del obispo de Avila y que le llevaría a ordenar -una vez recibida la contestación del Dr. VIDAL- la inserción en su boletín eclesiástico del documento al que acabamos de referirnos. En ella daba detallada cuenta al cardenal de la interpretación de la ley efectuada por el en un principio y le informaba de la actitud adoptada, de acuerdo también con las previsiones legales, por el Ayuntamiento avulense, contrario a la exégesis laxa hecha por parte de la jerarquía:

(187) s.f., "Cuestiones pastorales ante las nuevas leyes civiles", BOE DE Avila, año 43, 30 de abril de 1932, núm. 4, págs. 201.

"Veo en el Boletín de su Arzobispado que interpreta la nueva Ley civil sobre cementerios suponiendo que en su publicación ha habido un error material al decir en el art.3º, después de prohibir la inhumación en las casas religiosas, "salvo lo dispuesto en el artículo primero", en vez de decir "en el artículo segundo"; y deduciendo, en consecuencia, que puede seguir enterrándose las religiosas de clausura en sus cementerios dentro de la misma.

"Ya me había fijado en que no tenía sentido la frase "salvo lo dispuesto en el artículo primero", pero no se me había ocurrido que pudiese ser un error material de haber puesto "artículo primero" en vez de "segundo". Como yo he publicado en mi Boletín que la Ley civil prohíbe que las monjas de clausura sean enterradas dentro de la misma, mucho le agradecería, para rectificarlo, saber si por parte de las autoridades civiles se admite en alguna parte esta interpretación benigna de la Ley, o si, fuera de la incoherencia de la salvedad referida al artículo primero, se tiene algún fundamento positivo para suponer el error material de la publicación de la Ley.

"Aquí en Avila, independientemente de lo que yo he dicho en el Boletín, el Ayuntamiento envió una Circular a todos los Conventos de clausura prohibiendo los enterramientos en sus cementerios, lo cual, aun en la interpretación benigna de la Ley, está facultado el Ayuntamiento a hacer "por causa de conveniencia pública". Y, Por tanto, será más difícil, en la ciudad, lograr nada prácticamente." ""

La carta de contestación del cardenal VIDAL, fechada el 3 de abril, expresaba el distinto criterio seguido por las autoridades civiles de Tarragona y ponía de manifiesto su propia postura, no carente, como era habitual en el, de perspicacia política, pero que perdía la fuerza que podía haber tenido si hubiera sido adoptada por toda la jerarquía:

"Por parte de nuestras autoridades se consideran aquí cementerios de carácter privado los de las Religiosas de clausura, y se ha procurado que en el plazo de un mes señalado para la revisión de derechos para las inhumaciones se haya dado a los

Municipios relacion de todas las Religiosas que tienen derecho a su inhumacion en los mismos. Como la salvedad que se hace en el art. 32 de la Ley carece totalmente de sentido refiriéndose al art. 19 y está muy puesta en razon relacionandola con el 22, me ha parecido obvio debia entenderse de esta manera; igual ha sido el criterio de otras personas competentes, pero no he creido prudente llamar sobre ello la atencion de las autoridades civiles, ni creo sea conveniente provocar una aclaracion, pues corremos el peligro de que llevemos las de perder, como en cuantas cosas reglamenta el poder civil relacionadas con la Iglesia.

«Por la confianza que V. me merece, no reparo en decirle claramente cuanto se refiere a nuestro caso, pues estoy seguro de que no se escapará a V. que la aplicacion de las leyes algo imprecisas, como la que nos ocupa, depende en gran parte del criterio de los funcionarios, y muchas veces al invocar cerca de ellos una interpretacion benigna dada por otros compañeros en otros sitios, en lugar de inclinarse a aceptarla, resulta en detrimento de aquellos, por dar motivo a consultas, que en las presentes circunstancias, en que el ambiente para que prosperen nuestros derechos está tan enrarecido resultan siempre en daño nuestro. Prácticamente lo he podido apreciar aquí, a raíz de ciertas preguntas formuladas en la Cámara relativas a cementerios, y ojalá no contribuyan a entibiar las relativamente buenas disposiciones que hasta el presente hemos encontrado en nuestros funcionarios civiles.»

Mas, así como la carta del Dr. PLA Y DENIEL habia venido motivada por las dudas que le habia planteado la interpretacion dada por el arzobispo de Tarragona en las "Breves acotaciones a la ley de secularizacion de cementerios" publicada por el boletín eclesiástico de la archidiócesis, la del Dr. ECHEGUREN contenia una expresiva

(189) *Esglesia i Estat durant la segona...*, II, pág. 653. Según indican los recopiladores del archivo del cardenal VIDAL Y BARRAQUER en la nota 1 de esta página, la referencia que hacia el cardenal a "otras personas competentes" era al obispo de Tortosa, cuya carta hemos recogido anteriormente. No tenemos noticia de otros criterios comunicados al cardenal en la misma línea que la contenida en la carta del Dr. FÉLIX BILBAO.

queja sobre la disparidad de criterios del episcopado al tiempo que informaba a VIDAL de la actitud favorable mantenida por las autoridades civiles de su diócesis, con lo que, una vez más, se ponía de manifiesto no solo la divergencia entre la jerarquía española sino, también, entre las mismas autoridades civiles a la hora de aplicar la legislación de la República.

"...la pena que me ha causado ver en los Boletines eclesiásticos juzgado con distinto criterio el caso de las sepulturas de las Religiosas dentro de su clausura o en el cementerio que suelen tener en sus buertos, habiéndose dado interpretaciones totalmente contrarias a los preceptos de la nueva ley; pues, mientras unos, como V. Eminencia, los ven autorizados en el parato 2º de dicha ley, otros los tienen por prohibidos en virtud del artículo tercero. El inspector de Sanidad de esta provincia opina también que subsisten dichos cementerios en virtud del párrafo 2º, y expresamente ha dado por bien hecha una inhumación que se ha hecho aquí lo mismo que antes en el convento de Brigidas. Es, sin embargo, de temer que otros no tuvieran ese mismo criterio."

Lamentaria VIDAL en su respuesta esta falta de unidad de criterio que podía dar lugar tanto a la confusión de los fieles como al desprestigio de la jerarquía ante las autoridades y aunque expresaba su confianza en que el hecho pasara desapercibido no dejaba de apuntar que las divergencias de interpretación hacían disociar los argumentos empleados, con lo que se perdía la eficacia que una unidad de actuación podía tener frente a la nueva legislación.

"...La falta de unidad de criterio por parte de nosotros en la apreciación de disposiciones por el estilo de las a que V. se refiere, con lo cual, además de lo no edificante del espectáculo, como no pase ello desapercibido, empeoramos las cosas, en lugar de encaminar nuestro común esfuerzo a

sacar de las mismas todo el partido posible."'''

Pese a esta falta de unidad, reflejada en la correspondencia transcrita, el tema de los cementerios privados no fue recogido entre los que habian de ser tratados por las conferencias de metropolitanos de 1932 o 1933, lo que hubiera servido, caso de hacerse, para clarificar el criterio del episcopado y tender a mantenerlo uniforme. El hecho de esta falta de interes por el tema por parte de la conferencia fue debido, probablemente, a la escasa atencion que prestaron al mismo los diversos obispos en los trabajos preparatorios de las mismas. Asi, en el momento de proponer los puntos a considerar para la de 1932, el unico que aludio a cuestiones relativas a estos cementerios, manteniendo de forma tajante la interpretacion dada en muchos de los escritos de sus hermanos sobre el error material de la ley, fue el obispo de Almeria, Dr. Bernardo MARTÍNEZ NOVAL, segun comunicaba el Dr. Manuel BASULLO JIMÉNEZ, obispo de Jaen, en la carta sin fecha dirigida al cardenal VIDAL y en la que, recogiendo las opiniones de los sufraganeos de la provincia granatense, señalaba en su punto cuarto:

"Solicitar, si es viable, del Gobierno una aclaracion al articulo 32 de la Ley de cementerios, en donde hay un error evidente al referirse al articulo 12 en lugar del 22. (Obispo de Almeria).'''

Por otra parte, una vez propuestos los puntos a tratar por las distintas conferencias episcopales, tan solo fue aludido este tema por la de la provincia burgalesa, si bien en una forma por completo alejada de la problematica planteada, ya que la pretension, reflejada en el acta de la citada conferencia, de que se siguieran las normas dadas

(191) Ibidem.

(192) Op. cit., III, pag. 348.

por los distintos prelados en sus respectivos boletines diocesanos parecia ignorar, precisamente, la disparidad de criterios en la interpretacion efectuada por aquellos, disparidad que era lo que hubiera sido preciso evitar. (193)

Como hemos indicado, en la regulacion de los cementerios privados que hacia el reglamento en su capitulo III, articulos 20 a 25, no aclaraba las dudas planteadas por la ley y ni siquiera hacia alusion alguna a que en tales cementerios pudieran entenderse incluidos los de las comunidades religiosas, cosa que en si era logica, toda vez que este era obviamente el caso general de la existencia de cementerios de tal caracter. Quizá por esta razón y quizá también por adoptar la fórmula de actuacion mantenida por el cardenal VIDAL de no esgrimir nuevos argumentos ni pedir aclaraciones, lo cierto es que la jerarquia se manifesto escasamente sobre este punto de la nueva norma y, así, tan solo hemos encontrado dos referencias a la materia en los boletines eclesiásticos consultados, referencias que siguen, precisamente, la interpretación dada a la ley por el arzobispo de Tarragona.

Estas son, de una parte, las contenidas en las "Instrucciones con motivo del Reglamento de la Ley de Cementerios" que el 27 de mayo de 1933 dió el Dr. PERELLÓ Y FOU, obispo de Vich y administrador apostolico de Gerona. En ellas aludia, precavidamente, a la posibilidad de que fuera errónea la remisión que el artículo tercero de la ley hacia

(193) "Por lo que respecta a enterramientos de personas religiosas que venian gozando del derecho de enterramiento en sus propios cementerios dentro de la clausura, y a los de los seglares, que se observan, en evitación de mayores males, las prescripciones dadas y publicadas ya en los respectivos Boletines a raíz de la promulgación de aquella ley, desde luego, injusta, siempre con vislar a dejar a salvo del mejor modo los derechos de la Iglesia y de los fieles cristianos." (Op, cit., pág. 394).

al primero, señalando que, de ser esto así, supeditaba la posibilidad de enterramiento de las religiosas en sus cementerios propios al previo reconocimiento de su derecho por la autoridad municipal. como, por otra parte, y según hemos visto, habían aconsejado otros prelados que se solicitara previamente.

"Tocante a los cementerios de los Conventos de Religiosas podría tenerse en consideración lo que dispone el Reglamento al tratar de los cementerios privados, desde el artículo 20 al 24, en el supuesto muy probable de que en la Ley de cementerios estuviese equivocada la referencia del artículo 32 al decir "salvo lo dispuesto en el art. 12.", queriendo decir 22, en que se habla de derechos adquiridos de sepultura en cementerios privados, en cuyo caso, reconociendo tal derecho la autoridad municipal podrían las religiosas ser enterradas en su cementerio propio."

La segunda referencia es la contenida en la "Circular" del vicario general de Valencia de 2 de abril de 1902, en la que, de forma drástica y con una postura, por tanto, divergente a la cautelosa que acabamos de ver en el Dr. PERELLO, se daba por bueno, sin más, el envío del artículo tercero de la ley al segundo, no pasando siquiera a plantear la mínima duda sobre tal cuestión y señalando, incluso, los recursos a interponer en el caso de que la autoridad municipal pudiera interpretar en forma diversa los preceptos del reglamento respecto a los cementerios privados en el caso de que estos fueran de comunidades religiosas.

"32. Reglamenta asimismo la disposición legal citada, cuanto se refiere a los Cementerios privados. Y como este carácter no puede negarse a los Cementerios de las religiosas de clausura, es bien llamemos su atención por conducto de los señores Capellanes o Curas Párrocos de los pueblos en donde estuvieren enclavados, sobre la revisión de derechos de las religiosas para ser inhumados sus restos en dichos Cementerios. A este fin,

(194) 27 de mayo de 1933, "Instrucciones del Rdo. Sr. Administrador Apostólico con motivo del Reglamento de la Ley de Cementerios". BDE de Gerona, año 77, 29 de mayo de 1933, núm. 5, págs. 168-173.

deben dirigirse a los Ayuntamientos, suministrando los datos necesarios sobre las personas que por haber hecho sus votos con anterioridad a la Ley de 30 de Enero de 1932, publicada en la "Gaceta de Madrid" del 6 de Febrero siguiente, tienen derecho a esa inhumación y a figurar en las listas, que deben formar los Ayuntamientos para el cumplimiento de dicha disposición legal.

«También debemos llamar la atención, que contra la denegación del Ayuntamiento a la formación o inclusión en las listas antes mencionadas, de las religiosas con derecho a ello, concedese recurso de alzada interpuesto dentro de los quince días desde la notificación del acuerdo, ante el Gobernador civil de la provincia; y contra la resolución del Gobernador, si fuera desestimatoria del recurso, proceda el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial dentro de los tres meses, contados desde la notificación de la resolución gubernativa.»⁽¹⁹⁵⁾

4.1. El poder civil.

Con independencia de estas escasas manifestaciones episcopales posteriores a la aparición del reglamento hay que aludir, para finalizar el tratamiento de la cuestión de los cementerios de religiosos, a los documentos fruto de la postura del poder civil que, aparte de las alusiones a ella que ya hemos visto manifestadas por distintos miembros de la

(195) 25 de abril de 1933, "Vicaría General del Obispado.- Circular", BOE de Palencia, año 83, 29 de abril de 1933, núm. 9, págs. 226-229.

jerarquía, fueron recogidas en los boletines eclesiásticos de 1933. Como en otras ocasiones ya comentadas los boletines no reflejarían la divergencia puesta de manifiesto por los obispos sino que pasarían a recoger únicamente los pronunciamientos favorables a la Iglesia.

Ejemplo de ello lo tenemos en la publicación efectuada por el boletín eclesiástico de la diócesis de Zaragoza y Tudela en 31 de mayo, que difundiría el oficio del gobernador civil de Zaragoza contestando a consulta formulada por el alcalde de Zaragoza, en nombre de su ayuntamiento, sobre los cementerios privados de los tres conventos de religiosas de clausura existentes en dicha ciudad.

El informe del abogado del Estado, asesor del gobierno civil, en el que el gobernador se basaba para evacuar la consulta, interpretaba era de aplicación a este caso lo dispuesto en el artículo segundo de la ley, interpretación que el obispado alabo expresamente y en la que se baso -citando también la circular del vicario general de Palencia a que acabamos de aludir- para dar detalladas directrices a las religiosas en punto a la reivindicación de los derechos sobre sus cementerios, al tiempo que efectuaba una minuciosa descripción del procedimiento seguido en este caso.⁽¹⁹⁶⁾

La primicia de esta postura, favorable a la interpretación benigna defendida por parte del episcopado, hizo que este documento y los comentarios de la diócesis turiasonense fueran publicados por otros boletines eclesiásticos, si bien no incluirían las normas prácticas de

(196) "Sección civil.- Enterramiento de Religiosas", BOE de Zaragoza y Tudela, año 71, 31 de mayo de 1933, núm. 732, págs. 331-342. Ver el apéndice núm. 6.

actuacion para las religiosas dadas por la diocesis de
 Tarazona. 1933.

El boletin eclesiastico de Toledo, muy condicionado por los comentarios del de Tarazona, puesto que el obispo de esta diocesis acababa de incorporarse a aquella sede como nuevo primado de Espana, preferiria publicar una nueva y extensa exegesis del contenido de la ley y de su reglamento de desarrollo, exegesis que concluia trayendo a colacion la difusion efectuada por el boletin de Tarazona a la resolucioin del gobierno civil de Zaragoza, apoyandose en ella como "interpretacion oficial" para defender que la referencia del articulo tercero de la ley al primero debia entenderse como error material y que, por tanto, a los cementerios de religiosas habia de ser de aplicacion el contenido del articulo segundo. En este comentario tambien se incluia una referencia al caso del sepelio del obispo de Cadiz, entendiendo que se habia efectuado plenamente vigente la ley y que su realizacion implicaba un reconocimiento por el gobierno de los derechos adquiridos y, tras ella, figuraban unas "normas practicas" para las religiosas en las que, aun indicando que estas podian hacer uso de sus derechos a enterramiento en sus propios cementerios, aconsejaba, por prudencia, que pidieran a los ayuntamientos que efectuaran el inventario y revision de derechos que establecia el reglamento de 8 de abril.

Aunque el proposito de este comentario era, precisamente, la defensa del derecho de los religiosos -y, singularmente, y como hacian todos los obispos, de las religiosas de clausura que era a las que principalmente

(197) Tal harian, entre otros, los boletines eclesiasticos de Barcelona (año 76, 15 de julio de 1933, núm. 13, págs. 245-254) Calahorra (año 74, 9 de agosto de 1933, núm. 9, págs. 146-155) Zaragoza (año 72, 1 de septiembre de 1933, núm. 18, págs. 292-304) Vich (año 79, 30 de septiembre de 1933, núm. 2130, págs. 452-460) o Madrid-Alcala, ya fuera del periodo examinado (año 48, 1 de diciembre de 1933, núm. 1596, págs. 427-433).

arectaba el problema- a la inhumacion en sus propios cementerios, comenzaba, siguiendo indudablemente el estilo del Dr. GOMA, con una lamentacion sobre las privaciones que a aquellas imponia la nueva legislacion, para pasar seguidamente a razonar que tal normativa no tenia las consecuencias de las que se lamentaba.

"En el articulo 32 de la Ley sobre cementerios, de 30 de enero de 1932, se dice: "En ningun caso sera permitida la inhumacion en los templos o en sus criptas ni en las casas religiosas o en los locales anejos a unos y otras." ¡Sacrificio grande para las religiosas de clausura el verse privadas de recibir un dia sepultura al lado de las que fueron sus hermanas y el no poder esperar reunidas en el mismo cementerio el dia de la gloriosa resurreccion! Dura era la Ley, pero habia que cumplirla y de hecho no pocas religiosas descansan ya en cementerios generales, lejos de sus amados conventos.

"No han faltado, sin embargo, como luego diremos, quienes defiendan que las religiosas que ya lo eran al entrar en vigor la citada Ley, tienen derecho a ser enterradas en los cementerios de sus conventos, y aun en algunos casos se ha conseguido que ese derecho haya sido reconocido por los gobernadores civiles.

"Siendo muchos los conventos de religiosas de clausura que hay en nuestra Diocesis, no parecera inoportuno si dilucidar tan interesante cuestion."

El comentario incluia, como primer apartado, una descripcion de las clases de cementerios permitidos por la ley y sus caracteristicas y condiciones: cementerios municipales; cementerios parroquiales; cementerios particulares que de hecho prestasen servicio como generales; cementerios privados; panteones de familia; cementerios de extranjeros y cementerios de moros y hebreos. En la referencia a estos ultimos se lamentaba que el reglamento concediera una situacion de privilegio a los extranjeros que profesaran una religion distinta a la catolica "agravando

aun mas el espiritu anticatolico de la Ley", y que reconociera los derechos de los moros y hebreos de las plazas de Ceuta y Melilla, cuyos cementerios, como los de los citados extranjeros, se permitian mientras continuaran prestando servicio. (198)

Seria tambien el boletin eclesiastico de Parazona y Tudela el primero en difundir el acuerdo adoptado por el ayuntamiento de Pamplona que, al ser favorable al derecho a enterramiento de las comunidades religiosas, elogiaba calurosamente:

"El derecho de las Comunidades Religiosas que poseian Cementerios privados para su servicio al tiempo de la promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios de 30 de enero de 1932, publicada en la "Gaceta" de 6 de febrero siguiente, va siendo reconocido de manera explicita, terminante, pública y solemne, por ilustres Ayuntamientos de notables y cultas ciudades, de importantes capitales, como derecho que debe ser respetado a favor de aquellas Religiosas que formaban parte de esas comunidades al tiempo de la publicación de la Ley, derecho que no lo han perdido sino que ha de ser reconocido y atendido con arreglo a la Ley y al Reglamento para su aplicación de 8 de abril del corriente año 1933, sin que valgan otras aplicaciones que se han querido hacer de disposiciones que unicamente se referian para lo sucesivo, para los derechos a adquirir y no a derechos adquiridos" (199) o establecidos hasta aquel momento y que se respetan, y a locales que no sean cementerios privados, que se reconocen, sin consentirse nueva apertura o ampliación, a favor de las personas a quienes aquellos correspondian al tiempo de la promulgación de la ley. Así lo reconocen y declaran esas distinguidas Corporaciones, previo informe luminoso y razonado de competente Asesor

(198) s.f., "Sobre enterramiento de religiosos", BOE de Toledo, año 89, 1 de agosto de 1933, núm. 10, págs. 220-225. Este comentario también fue publicado por otros boletines eclesiásticos, así, entre los consultados: Barcelona (año 76, 31 de agosto de 1933, núm. 16, págs. 289-296), Málaga (año 66, septiembre de 1933, núm. 11, págs. 306-314) o Córdoba (año 76, 25 de octubre de 1933, núm. 18, págs. 227-337). Ver el texto íntegro de este comentario en el apéndice núm. 7.

(199) En bastardilla en el original.

Juridico, al resolver sobre los escritos acompañados de lista y certificación, presentados por las Comunidades Religiosas para la debida aplicación de la Ley y en conformidad con lo dispuesto en la misma y su Reglamento."

Tras insertar el texto integro del secretario de la corporación pamplonesa esta publicación incluía el anuncio de la de Zaragoza abriendo plazo a las comunidades o particulares que tuvieran cementerios de caracter privado, a fin de que presentaran relación de personas que tuvieran derecho a ser enterrados en ellos. Finalizaba con un comentario sobre el derecho de las religiosas que hubieran profesado antes de la entrada en vigor de la ley a seguir siendo inhumadas en los cementerios de sus comunidades, dejando bien claro que tal derecho no correspondia a las nuevas religiosas, a las que pasaba a ser de aplicación la disposición del articulo tercero de esta y, por tanto, habian de ser inhumadas en el cementerio general. Curiosamente, y olvidando que la jerarquia nunca se habia privado de calificar una ley como injusta cuando así la habia considerado, este comentario se basaba, en uno de sus puntos, para fundamentar la interpretación que defendia, en la justicia insita a toda ley -y, por tanto, a la que comentaba- "que debe ser justa y norma de lo justo"; de ahí que el proposito del legislador no pudiera ser el de clausurar los cementerios de las religiosas.

"Segun este informe, es indudable⁽²⁰⁰⁾ que el articulo 2º se refiere a Cementerios privados y a derechos adquiridos al tiempo de la promulgación de la ley. Ahora bien; no puede dudarse de que Comunidades Religiosas poseian verdaderos Cementerios privados para su servicio al tiempo de la promulgación de la ley de 30 enero 1932. Luego es tambien indudable que es de aplicación para ellas, en lo que les favorece o perjudica, el articulo 2º de la dicha ley. Las favorece en lo referente a las religiosas que formaban parte de la Comunidad al tiempo de la promulgación de la

(200) En bastardilla en el original.

ley, con derechos ya adquiridos en la materia; las perjudica en lo que se deriva para las nuevas Religiosas posteriores, las que no son favorecidas por ese artículo y a las que habrá de aplicarse el artículo 32 referente a lo sucesivo con los generales de la ley. Por lo tanto, habrá de atenerse a estas disposiciones y, si no se pretenden excepciones privilegiadas o favorables, tampoco deben consentirse excepciones lesivas y restrictivas de los derechos adquiridos que la ley respeta y ampara

«Tal vez convenga también tener en cuenta lo que se dice en el Decreto que precede como preámbulo firmado por el mismo Excelentísimo Sr. Presidente de la Republica al Reglamento para la aplicación de la ley de Cementerios, cuando al tratar de cementerios de Extranjeros dice "Es evidente que, en lo sucesivo, no debe concederse a los extranjeros la facultad de construir nuevos cementerios privados, permitiéndoles lo que no se permite a los nacionales; pero no sería justo tampoco clausurar los que ahora tienen..." Pues esto mismo podemos decir en la materia, por lo que respecta a las Religiosas. Podrá disponerse lo que se estime conveniente para lo sucesivo; pero no sería justo⁽²⁰¹⁾ clausurar los cementerios que ahora tienen las Religiosas con todos sus derechos adquiridos sobre los mismos y que poseían al tiempo de la promulgación de la ley. Y, si no es justo, no debe así interpretarse la ley que debe ser justa y norma de lo justo, por lo que es evidente que no intenta clausurar estos cementerios y lesionar derechos adquiridos que respeta y reconoce. El texto de la ley, el contexto, las disposiciones complementarias, el paralelismo, los principios de derecho y las normas generales de exégesis legal favorecen e imponen la aplicación indicada a los casos que nos ocupan." ⁽²⁰²⁾

Queremos referirnos, por último y para acabar este epígrafe, a la extensa glosa efectuada por el boletín eclesiástico de la diócesis de Segovia con motivo del acuerdo favorable adoptado por el ayuntamiento de dicha

(201) En bastardilla en el original.

(202) s.f. "Enterramiento de Religiosas", BOE de Tarazona y Tudela, año 71, 31 de octubre de 1933, núm. 742, págs. 715-722. Ver el apéndice núm. 8.

localidad, glosa que comenzaba aludiendo al "arón secularizador de la ley de cementerios", la cual "para conseguir su objetivo de reunir a todos los ciudadanos en un cementerio comun, no repara en desconocer y conculcar la doctrina de la Iglesia articulada en el Código Canónico, ni los derechos de los fieles."

Más esta crítica pasaba a reconocer que el legislador respetaba los derechos adquiridos, según la regulación contenida en el artículo segundo de la ley "sobre cuya aplicabilidad, a estas fechas, no planteaba duda si bien tal disposición merecía también el comentario adverso del redactor:

"Aparece claramente en el articulado de la Ley el empeño de cuidar todo detalle, de no dejar abierto en esta materia vano alguno ni aun el mínimo de una saetera, y así dispone la intervención directa de los municipios en la administración de los cementerios privados, los obliga a la revisión de los derechos adquiridos, con determinación bien concreta de las personas que tengan el privilegio de inhumación en los mismos, y una vez atendidos esos derechos impone su clausura. Pero es digno de notarse que dice: una vez atendidos esos derechos, no antes."

En tal caso, añadía el comentarista, se encontraban, precisamente las comunidades religiosas, cuyo derecho a inhumación en sus propios cementerios habían venido sosteniendo los distintos prelados y había sido reconocido por diversos municipios.

Más diversas consideraciones jurídicas, entre las que destaca la puntualización de que tal derecho era reconocible a las religiosas profesas antes de la entrada en vigor de la ley, pero no a las que hubieran profesado con posterioridad a la misma, consideraba como "obligada en justicia" la resolución del ayuntamiento de Segovia

reconociendo el citado derecho a las comunidades religiosas de la localidad, pasando a relatar los pasos dados para alcanzarla y alabando "la buena disposición, diligencia y delicada corrección, mostradas por la Autoridad municipal". Este documento, a similitud, como hemos visto, de los publicados por otros boletines eclesiásticos, acababa incorporando unas "Normas de procedimiento" a seguir, en vista de todo lo descrito, por las comunidades de religiosas de la diócesis.***

(203) s.f., "Se reconoce a las Comunidades Religiosas de Segovia el derecho de inhumación en sus Cementerios", BOE de Segovia, año 78, 15 de noviembre de 1933, núm. 21, págs. 476-486, Ver el apéndice núm. 9.

5. La conducción de los enterramientos. Obispos y arzobispos de Toledo, Tuy, Astorga, Sevilla, Burgos, Barcelona, Málaga, Calahorra y La Calzada, Segovia, Tarazona (administración apostólica de Tudela), Santiago de Compostela y Vitoria.

Otra controvertida cuestión que quedó planteada desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución fue la relativa al ritual de los enterramientos.¹²⁰⁴ Al establecer el artículo 27 en su tercer párrafo que las manifestaciones públicas del culto habrían de ser autorizadas en cada caso por el gobierno ¿requerían tal autorización los acompañamientos de cadáveres con la liturgia que preceptuaba la Iglesia o había de considerarse que tales actos no entraban en el concepto de manifestación externa de culto?

La primera interpretación encontrada sobre tal cuestión y que, por ser favorable a los intereses de la Iglesia, fue publicada en los boletines eclesiásticos consultados, es la contenida en la circular del gobernador

(204) Del fanatismo existente en este tema a lo largo del período examinado, aunque teniendo en cuenta lo indicado en la nota b de este capítulo, nos dan cuenta diversas noticias publicadas en la época. Así, el caso del entierro de un obrero en Valladolid, fallecido en accidente de construcción, y al que sus patronos habían invitado al clero, pero sus compañeros de la Casa del Pueblo, no conformes con dicha invitación, pidieron a los sacerdotes que se retiraran, lo que hicieron sin más incidentes, ("Entierro de un obrero.- El público invita al clero a retirarse", "El Sol", 21 de julio de 1931)

Has pintoresca que esta noticia era la relativa al entierro celebrado en un pueblo de Valencia, que había revestido las características de civil y religioso:

"En el pueblo de Alfár ha ocurrido un suceso que es objeto de muchos comentarios. A un vecino de dicho pueblo se le murió su esposa y quiso que la enterrasen en el cementerio civil; pero no quería prescindir del toque de las campanas de la parroquia ni de que la muerte fuese llevada a la Iglesia antes de ir al cementerio. El cura párroco se opuso a ello, diciendo que, de hacerse las ceremonias religiosas propias del caso, el cadáver debía ser enterrado en el cementerio católico; pero el viudo no se conformó con este parecer, e

civil de Zaragoza de 31 de diciembre de 1931:

"Los entierros, aunque adopten estructura procesional y aunque en ellos intervengan ministros del culto, no parece que puedan incluirse en términos generales, en la restricción constitucional, pues su finalidad principal no es hacer una exteriorización pública profesional.

insistió en sus pretensiones, hasta el extremo de que se originó en el pueblo una discusión general que terminó con el triunfo de la peregrina teoría del viudo, es decir, que la iglesia tocó sus campanas, el cadáver pasó por la parroquia y luego fué a parar al cementerio civil,

«Enterado el gobernador de lo ocurrido, ha oficiado al alcalde de Alfár, diciéndole que es preciso adopte las medidas necesarias para evitar la repetición de estos hechos, y que, en lo sucesivo, los entierros se hagan civil o canónicamente; pero no de esta forma mixta que tan impropio resulta." ("Fúnebre y pintoresco.- Un entierro mixto de civil y eclesiástico en un pueblo de Valencia", "El Sol", 29 de septiembre de 1931).

No todas las controversias se resolvían, no obstante, de estas pacíficas formas y, así, en un pueblo de Jaén las discrepancias sobre la forma de efectuar un entierro tendrían consecuencias más graves:

"...ayer tarde, a las cuatro y media, se efectuó en Villanueva del Arzobispo el entierro de Vicente Moreno González, de setenta y seis años, quien había dejado manifestación escrita de que la ceremonia se realizara por el rito católico. Una Comisión de obreros visitó al alcalde para cerciorarse de si era cierta o no la noticia, y la Comisión comprobó su veracidad, ya que el párroco había entregado al alcalde la nota dejada por el fallecido, mostrándose los comisionados satisfechos,

«Cuando se procedía a sacar el cadáver, los hijos del finado protestaron, pues era deseo de estos que se efectuara el entierro por lo civil. El féretro se hallaba sobre una mesa, en plena calle, cosa desacostumbrada en el pueblo, y cuando llegó el párroco, y comenzaba a desfilar la comitiva, los allí congregados empezaron a arrojar piedras sobre el acompañamiento y el clero, protestando en esta forma porque el entierro fuese católico, toda vez que los familiares del finado no lo querían así.

«Una vez puesta en marcha la comitiva, sonó un disparo de escopeta, y seguidamente otro, resultando heridos José Burgos Muñoz, industrial, y gravemente, el obrero Pedro Simón Gruoso Rodríguez, que falleció a las nueve de la mañana de hoy, a consecuencia de las heridas recibidas. El párroco también resultó con una herida de carácter leve en el cuello, a consecuencia de una pedrada, y el coadjutor, también de pedrada, con una pierna lesionada..." ("Se promueven graves sucesos con motivo de un entierro católico", "El Sol", 12 de noviembre de 1932).

Otro ejemplo, esta vez de signo contrario, lo tenemos, finalmente en esta otra noticia:

Debe entenderse, pues, que los acompañamientos de cadáveres no están sujetos al requisito de autorización del Gobierno; en las precedentes normas deberán inspirarse en cada caso los alcaldes, etc." (205)

La ley de 30 de enero de 1932, al limitarse a señalar en su artículo primero, y refiriéndose a los cementerios municipales, que sólo podían practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura, (206) dejaba subsistente el problema. La jerarquía volvió, pues, a dar su interpretación tanto sobre este precepto de la ley como sobre lo determinado por la Constitución a fin de orientar la actuación de los parrocos y de los fieles.

Como en este epígrafe veremos, al tratar de dilucidar si la realización de enterramientos con cortejo sagrado requería o no autorización del poder civil, este, en los documentos en que, de pluma de los gobernadores civiles, abordó el tema, se cidió principalmente a contemplar la disposición contenida en el artículo 27 de la Constitución, mientras la jerarquía eclesiástica, por el contrario, escilo

"Bilbao 14.- Irreverencia de tres sacerdotes.- Por diversos conductos llega a nosotros una noticia que pone de relieve la intransigencia de algunas gentes.

"Ayer tarde pasaba frente a la iglesia de San José un entierro civil, y con la comitiva, muy numerosa, se cruzaron tres sacerdotes. Poco importó a éstos el respeto que merece un cadáver, e intentaron pasar de largo sin descubrirse; pero la maniobra no pasó inadvertida para algunos de los que iban en el duelo, los cuales increparon a los sacerdotes, que llegaron a recibir algunos golpes. El hecho produjo el natural revuelo, y poco faltó para que los sacerdotes recibieran duro castigo. De el suceso no se ha dicho nada en los centros oficiales." ("El Sol", 15 de abril de 1933)

(205) BOE de Zaragoza, 1 de marzo de 1932, núm. 2, pág. 99. Esta circular fue reproducida por diversos boletines eclesiásticos, así, entre los consultados: Avila (año 43, 11 de marzo de 1932, núm. 3, pág. 157) Tarazona y Tudela (año 70, 30 de abril de 1932, núm. 706, pág. 313 y nuevamente el 15 de agosto de 1932, núm. 713, pág. 539), Brihuega (año 51, 1 de septiembre de 1932, núm. 14, pág. 314), Barcelona (año 75, 15 de septiembre de 1932, núm. 17, pág. 348) Madrid-Alcalá (año 47, 1 de octubre de 1932, núm. 1568, págs. 338-339) o Gerona (año 76, 28 de noviembre de 1932, núm. 13, pág. 330).

(206) Ver la nota núm. 7.

entre acogerse al silencio guardado por la ley de secularización de cementerios, o ampararse en el hecho de que, por no ser los enterramientos manifestación externa de culto, no venían afectados por la autorización previa requerida por la Norma Suprema.

Ejemplo del primer caso aludido de interpretación eclesiástica lo encontramos en el contenido de las "Observaciones" a la ley de cementerios publicadas por el boletín eclesiástico de Toledo y reproducidas en el de Ávila. En ellas se destacaba, refiriéndose al artículo primero de la ley de 30 de enero, el silencio de la norma y, por tanto, su falta de incidencia en el ritual seguido hasta el momento:

"...¿Se prohíben los ritos religiosos en la conducción de los cadáveres?. La ley trata solo de los cementerios; por tanto, las palabras transcritas se refieren únicamente a los ritos que antes se practicaban en la capilla del cementerio, y que ahora solo se consentirán en cada sepultura." (207)

En la ya comentada "Instrucción pastoral acerca de los cementerios y protesta razonada contra la secularización de los mismos" escrita por el obispo de Tuy, Dr. Antonio GARCÍA Y GARCÍA, el 24 de febrero de 1932, se recordaba, al comentar los preceptos canónicos, el ritual eclesiástico sobre los enterramientos, ritual que incluía la traslación del cadáver a la iglesia. Este recordatorio tenía por única

(207) s.f. "Ley sobre cementerios.- Observaciones", BOE de Toledo, año 88, 16 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 61-65 y s.f. "Cuestiones pastorales ante las nuevas leyes civiles", BOE de Ávila, año 43, 11 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 156-161. El mismo párrafo, pero añadiendo la frase "No se trata de cementerios parroquiales que no hayan sido incautados; mientras no lo fueren y en debida forma, nada debe innovarse", aparecía también en la "Sección de consultas: sobre cementerios y sepulturas" del BOE de Vitoria, año 68, 15 de abril de 1932, núm. 9, págs. 241-243, el cual señalaba que, a su vez, lo había tomado del boletín diocesano de Canarias.

finalidad llamar la atención de los fieles a fin de que tal piadosa práctica siguiera realizándose, no pronunciándose en forma alguna sobre la incidencia que la Constitución o la ley de cementerios pudieran tener sobre ella, por lo que preciso es concluir que entendía que ninguna de las dos normas venían a afectarla.

"34. No se contenta la Santa Iglesia con que los cadáveres de sus hijos sean sepultados en tierra sagrada; sino que ordena que el oficio de sepultura eclesiástica conste de la traslación del cadáver a la iglesia, exequias en la misma *super illud*, sobre el cadáver, y deposición del mismo en el lugar legítimamente deputado para sepultar a los fieles difuntos. Así lo ordena el canon 1204." (1208)

Curiosamente, tal advertencia no era seguida, como habría cabido esperar, por un comentario de la legislación reciente, sino por una amarga crítica de la progresiva secularización de las costumbres sociales.

"En esta disposición se ve como la Iglesia se opone al laicismo que en los entierros hace tiempo se viene infiltrando y extendiendo y tiende a suprimir cada día más elementos religiosos, hasta que al fin sea escuetamente el entierro de un animal muerto, para que se pudra, sin halo alguno de misterio religioso, sin sentido alguno divino ni humano, como es el entierro del cadáver de un perro o de un gato. Urge por tanto conservar o restituir la forma religiosa y piadosa tradicional de los entierros, para que estos sean como la Santa Iglesia quiere que sean y como corresponde a la dignidad divina y humana del cristiano." (1209)

Por el contrario, y siguiendo la línea de su título, las "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de cementerios" que por las mismas fechas publicaba el boletín

(1208) Ver el apéndice núm. 10.

(1209) 24 de febrero de 1932, "Instrucción pastoral acerca de los cementerios y protesta razonada contra la secularización de los mismos", BDE de Iuy, año 73, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 71-90.

eclesiástico de Astorga, puntualizaban claramente como la ley, al disponer que solo podrian practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura, no prohibia el ritual de la conduccion del cadaver.

"a) que esta disposicion se refiere a los cementerios municipales,"⁽¹⁰⁾ dentro de los cuales permite los ritos funerarios del culto aunque solamente en cada sepultura; pero,

"b) No prohibe los ritos que se celebren fuera, como son el levantamiento del cadaver y su conduccion, ni tampoco la practica en el cementerio parroquial de todos los ritos eclesiasticos sin limitacion alguna."⁽¹¹⁾

Frente a estos criterios resultaba muy acertado -en tanto que se apoyaba exclusivamente en el contenido del articulo 27 de la Constitucion y que interpretaba correctamente, y en sentido opuesto a gran parte de la jerarquia, el silencio de la ley de cementerios- el contenido en la "Instruccion acerca de cementerios y enterramientos de los fieles" dictada por el arzobispo de Sevilla Dr. Eustaquio (LUNDAIN ESTEBAN el 6 de marzo de 1932. "Instruccion" que, ademas, se inclinaba por una solucion pragmatica, pura y simplemente:

"49 La Iglesia tiene derecho a conducir pública y solemnemente los cadáveres de sus fieles al cementerio. Este derecho no lo impide la ley

(210) En bastardilla en el original.

(211) s.f. "Breves notas aclaratorias a la nueva ley de cementerios", BOE de Astorga, año 80, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 81-89. En base a estas afirmaciones el número siguiente del boletín eclesiástico publicaba la circular de aplicación de estas "Breves notas"; "Vicaría General.- Circular.- Para dar cumplimiento a lo expuesto en las notas aclaratorias de la Ley de Cementerios... venias en disponer: 12. Que mientras no se disponga otra cosa, los señores sacerdotes encargados de parroquia continen haciendo los entierros, el levantamiento y conduccion de cadáveres y administrando el Santo Viático a los enfermos en la misma forma que hasta ahora venian haciendolo." (BOE de Astorga, año 80, 15 de marzo de 1932, núm. 6, pág. 99. Destaca, refiriéndose a la ley de cementerios, la referencia al viático a causa del artículo 27 de la Constitucion).

civil; pues no reviste carácter de manifestación pública de culto, sino servicio religioso en favor de un particular y a petición de una familia, la del finado. Pero si la autoridad civil -lo que sería muy lamentable- impide el ejercicio de este derecho, hágase uso del que la ley reconoce en el artículo 18 por estas palabras: "solo podrán practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura". Alcese pues, en este caso la cruz en el lugar de la sepultura, y recite allí el sacerdote el oficio de sepultura o las preces y ritos acostumbrados, según las normas litúrgicas."⁽²¹²⁾

El arzobispo de Burgos, Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, distinguía, en su "Instrucción a nuestros sacerdotes" de 8 de marzo de 1932, tres tipos de presencia del ritual litúrgico en el exterior de los templos: las procesiones "u otro acto del Culto fuera de los Templos; la administración del Viático y la conducción de enterramientos." Respecto a las primeras señalaba a los parrocos que, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, debían solicitar permiso por escrito de la autoridad gubernativa, "cuya representación genuina e inmediata en los pueblos es el Alcalde o Presidente de las Juntas vecinales", y si recibieran de ellos contestación negativa deberían proceder a solicitar el permiso al gobernador civil. Refiriéndose a los viáticos indicaba: "Ad cautelam no estará de más que se solicite también el aludido permiso cuando el Santo Viático haya de administrarse con notable concurrencia"⁽²¹³⁾, y, al pasar a hablar de la conducción de enterramientos, venía a destacar, siguiendo la misma argumentación que el obispo de Astorga, que si la ley de 30 de enero de 1932 se refería exclusivamente a los cementerios no podía regular lo que se realizara fuera de ellos:

(212) 6 de marzo de 1932, "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles", BDE de Sevilla, año 75, 7 de marzo de 1932, núm. 1201, págs. 92-97, reproducida en el BDE de Tenerife, 1932, marzo y abril, núm. 3 y 4, págs. 37-44.

(213) En bastardilla en el original.

"En el artículo 12 de la nueva Ley sobre Cementerios se dice: "Solo podrán practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura". Es de advertir que la Ley trata sólo de los Cementerios; por tanto las palabras transcritas se refieren únicamente a los ritos eclesiásticos que antes se celebraban en la Capilla del Cementerio, o bien en el recinto o estancia dentro del mismo, donde se colocaba el féretro para rezar un responso, ritos estos que ahora solo se consienten *en cada sepultura*."⁽²¹⁴⁾
 Por consiguiente no están prohibidos por la Ley los ritos religiosos, ceremonias, preces y cantos en la traslación de los cadáveres al cementerio."⁽²¹⁵⁾

Sin embargo, si con esta matización quedaba interpretado el contenido de la Ley, no por ello se salvaba la duda principal que venia planteada por la Constitución y en la que la nueva disposición legal simplemente no entraba: ¿era la conduccion de enterramientos una manifestacion externa del culto o no?. Si para el viático solemne debia solicitarse el permiso "ad cautelam" ¿no seria conveniente hacer lo mismo con la conduccion de cadáveres toda vez que la duda sobre esta cuestion no surgia de la ley, como el arzobispo muy bien apuntaba, sino de la Ley fundamental?.

A ello se referiria la "Instrucción sobre cremacion de cadáveres, cementerios y enterramientos" que, también con fecha de 8 de marzo, publicaba el boletín eclesiástico de Barcelona, si bien tal referencia no iba apoyada, como parece era lo logico, en el contenido del artículo 27 de la Constitución sino en la ley especial que, según lo establecido en el artículo 26, debería regir en un futuro todo lo concerniente a la religion católica en el marco general de las distintas confesiones:

(214) En bastardilla en el original.

(215) 8 de marzo de 1932, "Instrucción a nuestros sacerdotes". BOE de Burgos, año 75, 15 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 111-113.

"A los que hubieren dispuesto de manera expresa que su enterramiento tenga carácter religioso, esto es, según el rito de nuestra Religión católica, se les podrá hacer el entierro en la forma hasta ahora acostumbrada. No ha variado sobre ello la legislación por la que hasta el presente nos hemos estado rigiendo.

"El artículo 26 de la Constitución dice que "Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial" y hasta que esta ley especial -que según referencia está preparando la Comisión jurídico-asesora- no se publique, está en vigor lo legislado anteriormente."

Y, más adelante, con el mismo razonamiento esgrimido por el arzobispo de Burgos, añadía:

"32 La 6ª y última observación es que en toda la Ley de secularización de cementerios solo hay, respecto del rito y ceremonias de los entierros, estas palabras, que se leen en el párrafo primero del artículo primero: "Solo podrán practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura" pero notese muy bien que el artículo primero de la Ley se refiere a los cementerios municipales y por tanto lo que en ese artículo se establece no hay que aplicarlo a los cementerios parroquiales. Dentro de estos, por consiguiente, todo puede y debe seguir como hasta ahora. Respecto del rito y ceremonias, cantos y preces de las traslación del cadáver no se haga innovación alguna, pues la ley nada dice." (216)

Y también a la ley especial que contemplaba el artículo 26 de la Constitución se referiría el obispo de Málaga, Dr. Manuel GONZÁLEZ GARCÍA, en su breve circular de 10 de marzo, copiando literalmente el párrafo del obispado de Barcelona sobre este punto y concluyendo, en consecuencia, que no había variado la legislación sobre la

(216) 8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120.

conduccion de enterramientos. "417"

Mucho más fundada era la referencia implícita al artículo 27 de la Constitución que hacia la "Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos" del obispo de Calahorra, Dr. Fidel GARCIA MARTÍNEZ, de 17 de marzo de 1932:

"No sólo no prohíbe la ley la práctica de los ritos religiosos en los mismos cementerios municipales, sino que expresamente los permite, si bien solo en la sepultura del finado, (art. 12). De la conducción del cadáver con la liturgia acostumbrada hasta el cementerio nada dice la ley, por lo tanto, no debe entenderse prohibida ni limitada; tanto más cuanto que esa conducción, mas bien que de procesion o manifestacion pública del culto, reviste el caracter de servicio religioso prestado a un particular o familia. "418"

Mas fue en la pastoral del obispo de Segovia, Dr. Luciano PÁREZ PLATERO donde se haria la primera referencia expresa a las disposiciones constitucionales:

"La sepultura eclesiastica, o el enterramiento religioso, comprende, segun el Derecho canonico, tres actos: traslación del cadáver, celebracion de exequias, inhumación en el cementerio, canon 1204. De donde se deduce clarisimamente que al estar permitido por la ley -art. 42- el enterramiento religioso de los que así lo hayan dispuesto, queda por el mismo hecho autorizada la conducción solemne de los difuntos con todos los ritos de la Iglesia."

Hasta aqui esta línea de razonamiento era la misma que hemos visto manifestada por los prelados de Burgos y de Barcelona: si la ley permitia el entierro católico, este

(217) 10 de marzo de 1932, "Circular.- Dando instrucciones sobre cementerios y enterramientos", BOE de Málaga, año 65, 15 de marzo de 1932, núm. 3, págs. 56-58.

(218) 17 de marzo de 1932, "Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos", BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 22 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 49-50.

debía realizarse con su ritual completo. Pero el obispo de Segovia, a diferencia del Dr. CASTRO ALONSO, no se contentaba con dar por suficiente el silencio de la ley en este punto sino que pasaba a analizarlo, mucho mas correctamente que se habia hecho por el obispado de Barcelona, desde el prisma del artículo 27 de la Constitución:

"Mirado este acto del cortejo fúnebre a la luz de la Constitución -art. 27-, tampoco puede oponersele fundadamente reparo alguno; porque la conducción litúrgica del cadáver, en la forma que el Ritual dispone, no reviste carácter de manifestación pública de culto, - al igual que la bendición de las casas y de los campos, el Santo Viático y la comunión de los enfermos- sino de servicio religioso prestado por la Iglesia a un súbdito e hijo suyo que lo desea y lo pide por si o por su familia."

De esta forma defendía que todos los casos enumerados no podían considerarse manifestaciones públicas de culto, sino de mero servicio religioso prestado a un fiel y a instancia de este. Pero el párrafo siguiente de la pastoral demuestra que tal interpretación no era la única posible, y, por ello, el obispo abogaba por una solución pragmática.

"Sin embargo, hemos visto con hondo pesar que la Autoridad Gubernativa tiene como prohibida y merecedora de multa la conducción de los cadáveres con cruz alzada, preces y ornamentos sagrados, según lo dispuesto por la Iglesia. En tal situación, límitense los Párrocos a recitar el oficio de sepultura en el cementerio, con arreglo al artículo 12 de la ley, y vean la forma de distinguir prácticamente un entierro católico de otro civil sin incurrir en sanciones." (219)

- (219) 15 [sic] de marzo de 1932, "Sobre la secularización de cementerios", BOE de Segovia, año 77, 13 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 109-115. La defensa de la autorización de la conducción de los enterramientos católicos basándose en los tres actos que, según las normas canónicas, constituían "La sepultura eclesástica o enterramiento religioso" y la aplicación de tales normas a la legislación civil, concretamente al artículo cuarto de la ley de cementerios, era argumento esgrimido igualmente por el obispado de León en sus "Aclaraciones a la Ley de cementerios" (BOE de León, 31 de marzo de 1932, págs. 112-118).

En efecto, tal era la actitud del gobernador civil de Segovia, lo cual dió lugar a una enérgica protesta, publicada en el número siguiente del boletín diocesano, con motivo no ya del entierro de un simple fiel sino del de un canonigo doctoral de la catedral y profesor de Derecho canónico del seminario conciliar. En este entierro se había hecho el oficio de sepultura en la casa mortuoria y el cadáver había sido acompañado hasta el cementerio por el obispo, el arcipreste y el arcediano así como por todo el clero catedral, beneficiados, profesores del seminario y superiores con un nutrido grupo de seminaristas, "todo el clero de la ciudad sin excepción y elemento seglar", mas sin que tal acompañamiento hubiera podido rodearse del ritual prescrito, por lo que el cronista, tras relatar los hechos, defendía que la nueva ley -a la que criticaba duramente- no implicaba la variación a que este entierro se había visto sometido.

"Con todo, faltó lo tradicional, lo que los Estatutos catedralicios tan cristianamente disponen para el entierro de sus ilustres miembros. Por primera vez, ni el Ilmo. Cabildo Catedral pudo trasladarse procesionalmente con Cruz alzada a la casa, ni llevar el cadáver, previas las litúrgicas preces, al Templo Catedral, para hacerle el oficio de sepultura, ni acompañarle después hasta el azoguejo, donde, cantados los últimos salmos y responso, despedía al Compañero, hasta el día de la resurrección.

«Esto aflige hondamente todo espíritu cristiano y levanta nuestra protesta, respetuosa con la autoridad, pero enérgica en la condenación del hecho.

«Los ritos religiosos, cantos y preces con Cruz alzada y Ministros, desde la casa a la Iglesia y desde esta al Cementerio, no están prohibidos por ninguna ley. No ha habido el menor cambio sobre este punto en la legislación, por la que hasta el presente nos hemos venido rigiendo. La ley de Cementerios, forjada al remo de dureza e injusticia, conculcadora, en tantas cosas, de los derechos de la Iglesia, de los católicos y de la libertad, siempre portada en los labios y mancillada burlescamente en los actos, con todo no

prohíbe los ritos religiosos en la conduccion de cadáveres. En el art. 1.º dice: "solo podran practicarse los ritos funerarios de los distintos cultos en cada sepultura". Pero ha de tenerse en cuenta que la ley trata solamente de los cementerios; por tanto las palabras transcritas se refieren unicamente a los ritos que venían practicandose antes en la Capilla del Cementerio, y que ahora unicamente se consentiran en cada sepultura. Y en todo el texto de la ley no se encuentran otras palabras alusivas a este punto.

«La conduccion pues de cadáveres con Cruz alzada, se rige como antes de la ley de secularizacion de cementerios; esta no ha inmutado nada. Ya hacia notar Nuestro Excelentísimo Prelado en la Circular sobre dicha ley, que la conduccion liturgica del cadáver... no reviste caracter de manifestacion pública de culto ».

Esta era, como hemos visto, la interpretacion generalizada de la jerarquía al texto de la ley e incluso, segun el ultimo párrafo transcrito, a la Constitución. Sin embargo, el redactor de esta queja introducía ahora un nuevo elemento claramente discordante con el artículo 27 que, al margen de toda ulterior legislacion, prohibía expresamente la manifestacion pública de cultos. No podía así -como parece pretender- ampararse en la falta de regulacion de algo que la Norma Suprema establecía expresamente. Continuaba, en definitiva, como piedra de toque, como hemos señalado, el solventar si la conduccion de enterramientos debía incluirse o no en la prohibicion del citado artículo constitucional. Así, con el mismo argumento esgrimido por el obispado de Barcelona, se añadía:

"Y el artículo 26 de la Constitución dice que 'todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial' y en tanto esta ley especial no se publique, esta en vigor lo legislado anteriormente.

«Esas prohibiciones no tienen la menor apoyatura legal; son reflejo del sentir de la autoridad.»

Pero si el argumento jurídico del comentarista no podía considerarse como válido, si había uno sociológico de relevante importancia y era que, a falta de normas expresas o de una aclaración jurídica a lo regulado en la Constitución, no todas las autoridades civiles interpretaban la prohibición contenida en esta en el mismo sentido; hecho que ponía de manifiesto el documento que comentamos:

"Podríamos presentar -aunque cristalinas son las razones indicadas- la conducta de no pocos gobernadores civiles, que, respetando las leyes de la República, no solo no impiden la conducción de cadáveres con cruz alzada y ritos religiosos, sino que donde los alcaldes de su jurisdicción por sectarismo, incompetencia, defectuosidad de conocimientos jurídicos o arbitrariedades, han prohibido esta, los han castigado con la sanción que merecían. No en todas partes se procede así, siquiera con respeto a la ley, sino que priva el criterio ilegal, es capricho impuesto por la amenaza y la fuerza coactiva. El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, al que debieran elevarse estos casos, es el obligado a cortar lo que denunciarnos y de lo que protestamos con todas nuestras fuerzas. Que no es serio ni favorable para la república el que las primeras autoridades de las provincias, sobre actuar algunas sin sujeción a las leyes vigentes, se contradigan en sus determinaciones -siempre de lamentar- pero sobre todo cuando tocan a los derechos más sagrados del hombre, como son los de sepultura." (220)

Estas manifestaciones eran totalmente exactas y así venía a corroborarlo, como más adelante veremos, la actitud de distintos gobernadores civiles, que, al igual que el pionero de Zaragoza, se vieron precisados a dictar sendas circulares sobre la conducción de los enterramientos. Circulares que, al ser favorables a la postura eclesiástica, fueron, como se venía haciendo en estos casos, reproducidas por los diversos boletines eclesiásticos.

(220) 18 de marzo de 1932, "Necrología", BOE de Segovia, año 77, 30 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 164-166.

Mas, mientras la autoridad civil no asumió la interpretación del precepto constitucional, la eclesiástica siguió viéndose obligada a dictar sus propias directrices y, así, el boletín eclesiástico de Toledo contestaba a mediados de marzo a unas "Consultas" relativas a si era necesaria o no la autorización previa gubernativa para la celebración tanto de procesiones como de entierros; contestándose en el primer caso, y en base a lo establecido en la Constitución, afirmativamente, mientras que en el segundo se estimaba que era un hecho muy distinto, dada su diferente finalidad (finalidad que explicaba no solo con argumentos religiosos sino con otros de índole sociológica expresivos de unas normas sociales que se situaban por encima de las religiosas) y que, por tanto, no requería tal autorización:

«¿Pueden considerarse como manifestaciones publicas del culto los entierros que se hacen con los ritos y ceremonias prescritos por la Iglesia? ¿Pueden, por tanto, prohibirlos los alcaldes y gobernadores?»

«El caso es muy distinto de las procesiones. El fin de los ritos de los entierros no es directamente hacer una manifestación de fe, sino el implorar la misericordia divina en sufragio del difunto. Para muchos la asistencia a los entierros no es mas que una manifestación de afecto, amistad o gratitud hacia el difunto, por lo cual, aun personas que no profesan la religión católica, no tienen reparo en asistir a los entierros católicos. Esto es prueba de que no consideran tales actos como manifestaciones públicas de culto. De hecho las mismas autoridades civiles concurren a dichos actos.

«Así, que de manera ninguna pueden considerarse como incluidos en los que el art. 27 de la Constitución llama manifestaciones públicas de culto, y por tanto no se necesita para celebrarlos autorización del Gobierno ni de sus representantes.

«A lo sumo, podrán exigir que les presenten las pruebas de la manifestación de voluntad del difunto; pero, si tal manifestación existe, ni podrán negar la autorización si se les pide,

ni imponer sancion alguna a quien no la haya pedido."***

Contrariamente a lo que era usual en el el Dr. GUMA dedico muy poca atencion a este tema y, asi, en su comentada pastoral de 30 de marzo de 1932, tan solo lo trato en el epigrafe destinado a las "normas practicas" y en un corto parraro en el que, en realidad, no entraba en el asunto, limitandose a determinar que el ritual del traslado de cadaveres debiera seguir siendo observado. Mas lo interesante en este caso es que dedico otro comentario a los "entierros civiles" y, curiosamente, asi como el comentarista de Toledo se habia referido a la concurrencia de personas no creyentes a los entierros catolicos para demostrar que estos no eran manifestaciones externas de culto, para el Dr. GUMA los llamados "entierros civiles" eran, precisamente, actos de hostilidad contra la Iglesia y, por ello, pedia a sus fieles que no participaran en ellos.

"Respecto a traslado de cadaveres, exhumacion de restos y traslacion a otro cementerio por lo que respecta a los catolicos, continuan en vigor las disposiciones canonicas sobre peticion de licencia del Ordinario, con sujecion al canon 1214,**** y demas formalidades mandadas observar para el traslado e inhumacion con los respetos debidos, piadosas practicas, oraciones y demas requisitos que es necesario, hoy tanto o mas que antes, observar.

"Atendiendo, finalmente, a que los llamados 'entierros civiles' pueden tener todo el caracter de una manifestacion de sectarismo y de hostilidad contra la Iglesia y sus piadosas practicas; que bien pudiera ocurrir, en estos tiempos de

(221) s.f., "Consultas", BUE de Toledo, año 88, 19 de marzo de 1932, num. 6, pags. 89-90. Reproducido en los boletines eclesiasiticos de Mondoñedo (año 75, 20 de abril de 1932, num. 8, pags. 82-84), Huesca (año 81, 1 de mayo de 1932, num. 5, pags. 112-114), Barcelona (año 75, 14 de mayo de 1932, num. 9, pags. 189-192), Granada (año 87, 15 de mayo de 1932, num. 3501, pags. 114-117) y Orihuela (año 51, 1 de junio de 1932, num. 9, pags. 228-230).

(222) Ver el apendice num. 9.

masonería militante, como ocurrió en Bélgica a mediados del pasado siglo, que algunos desdichados se solidarizaran, para la obtención de ciertas ventajas, comprometiéndose a rechazar los sacramentos y a ser enterrados civilmente; que en estos tiempos de intransigencia sectaria es cuando se impone la santa intransigencia en las manifestaciones públicas de nuestra fe; es Nuestra voluntad, a la que quisieramos se atemperaran todos nuestros diocesanos, que los que se precien de verdaderos católicos no concurren a tales entierros, caso de que se diere alguno, a fin de no autorizar con su presencia un acto que, hoy por hoy, tendría toda la eficacia de un apostolado contrario a nuestras creencias."⁽²²³⁾

Frente a estas frases, destacan por su laconismo los "Avisos a los Encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales" publicados en el boletín eclesiástico de Santiago de Compostela en abril de 1932. En ellos, sin entrar en interpretación o matización alguna, se defendía la procedencia de seguir actuando como hasta entonces:

"Mientras las circunstancias no obliguen a proceder de otra manera, no se haga innovación alguna en cuanto al acompañamiento de los cadáveres y oficio de sepultura de los mismos. Sobre todo, dentro de los cementerios parroquiales todo puede y debe ⁽²²⁴⁾ seguir como hasta aquí."⁽²²⁵⁾

Para terminar esta referencia a los pronunciamientos eclesiásticos sobre el tema de la conducción de los enterramientos queremos aludir a la que no dejaba de ser novedosa interpretación dada por la "Sección documental" dedicada a los cementerios, del boletín eclesiástico de Vitoria y en la que, basándose en la ley de 30 de enero, se

(223) 30 de marzo de 1932, "El laicismo póstumo", BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 704, págs. 207-239.

(224) En bastardilla en el original.

(225) s.f. "Avisos a los Encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales", BOE de Santiago de Compostela, año 71, 16 de abril de 1932, núm. 2672, págs. 76-77.

veía en el silencio de esta precisamente una autorización a la celebración de los actos litúrgicos tradicionales, toda vez que los mismos no eran una manifestación pública de culto.

"La ley autoriza los ritos religiosos aun en los cementerios *municipales*,"" si bien solo en la misma sepultura. La conducción del cadáver con la liturgia prescrita en los sagrados cánones hasta el cementerio no está prohibida en la ley, sino mas bien autorizada en favor de aquellos que han manifestado su voluntad de que tenga carácter religioso. Esta conducción del cadáver al cementerio no es una procesion o manifestación pública de culto, sino que -como advierte el Excmo. Sr. Obispo de Calahorra- reviste mas bien el carácter de servicio religioso prestado a un particular o familia.""

(226) En bastardilla en el original.

(227) 26 de marzo de 1932, "Sobre cementerios", BOE de Vitoria, año 88, 1 de abril de 1932, núm.8, págs. 219-221. Reproducido por el BOE de Zaragoza, año 71, 2 de mayo de 1932, núm. 9, págs. 171-174. Sobre la referencia al obispo de Calahorra ver la nota 218.

5.1. El poder civil.

Ya hemos indicado que la distinta actitud adoptada por las autoridades municipales respecto al sentir de la jerarquía en la cuestión del acompañamiento de los cadáveres de los fieles y que había sido claramente denunciada por el comentarista del boletín eclesiástico de Segovia, motivo que varios gobernadores civiles se vieran precisados a dictar las oportunas normas al respecto; normas que, en el caso de ser favorables a la interpretación eclesiástica fueron disuadidas por los boletines diocesanos.

Así, la circular del gobernador civil de Lugo de 20 de junio de 1932 no solo corroboraba la existencia de diversas interpretaciones por parte de las autoridades municipales sino que señalaba claramente que, a la luz del artículo 27 de la Constitución, no podían considerarse las conducciones de enterramientos manifestaciones externas de culto, ya que -como sostenía la jerarquía- era otra su finalidad.

"Algunas agrupaciones políticas afectas al actual régimen vienen formulando denuncias a este Gobierno relacionadas con los entierros católicos, y algunas Autoridades locales han elevado consultas en la creencia de considerar como manifestaciones públicas de culto, a los efectos de la autorización previa del Gobierno, para efectuar las conducciones a los cementerios de los cadáveres de personas fallecidas profesando la religión católica.

«Para evitar reclamaciones y protestas y para prevenir cualquier perturbación que llegase a constituir una alteración del orden público, se

hace preciso advertir a las Autoridades y agentes subordinados a este Gobierno que la interpretación del artículo 27 de la Ley fundamental de la Republica ha de hacerse atendiendo a la letra y al espíritu de amplia y democrática libertad de conciencia y de culto, que informa dicho precepto, como la Constitución toda sin que en la exegesis de esta quepan aplicaciones de criterios ni ideas personales que la menoscaben en detrimento del prestigio de la autoridad.

«Las conducciones de cadáveres al cementerio, cualquiera que sea la religión que haya profesado el difunto y el rito de esta religión, no pueden estimarse como manifestaciones publicas de culto, ya que en los entierros, la asistencia del clero y el acompañamiento de deudos y amigos del finado tiene un fin accesorio y no constituye, como en las procesiones, una publica manifestación de fe religiosa, a la que indudablemente se refiere el párrafo tercero del citado art. 27.

«Por lo tanto se hace presente a las Autoridades y agentes que no se precisa autorización gubernativa para que asista el clero parroquial a los entierros y viáticos de los católicos, como para cualquier otra formalidad ritual de los que profesen otra confesión cualquiera, en tanto las Cortes o los Poderes publicos no dispongan lo contrario.

«Lo que se hace publico para general conocimiento y en especial para el de los Sres. Alcaldes de la provincia, como Delegados del Gobierno en sus respectivos municipios.»

La misma línea de argumentación, aunque con mayor grado de desarrollo, era la seguida por el gobernador civil de Pontevedra en su circular de 26 de junio de 1932, indudablemente inspirada en la del de Lugo, en la cual señalaba expresamente que la ley de cementerios no se referia a la cuestión de la conducción de los enterramientos:

«La asistencia del clero con cruz alzada a los enterramientos y la administración del Viático con acompañamiento religioso han sido entendidos por algunos alcaldes y por determinadas organizaciones

políticas y societarias como manifestaciones externas del culto que requieren, en cada caso, según el artículo 27 de la Constitución, permiso del Gobierno para verificarse.

«El citado texto constitucional está redactado con amplia criterio de tolerancia; puesto que no establece un precepto prohibitivo, sino que condiciona las modificaciones (sic) públicas de cualquier religión a la libre apreciación del Gobierno para que puedan celebrarse.

«Es lógico, pues, estimar que no estuvo en la intención del legislador exigir este requisito para la conducción de cadáveres, por ser un acto de naturaleza esencialmente piadosa, como también ocurre con la administración del Viático a los enfermos.

«La misma letra estricta del citado precepto legal abona esta interpretación, ya que, exigiéndose en cada caso el permiso de la autoridad gubernativa, si se estimasen manifestaciones externas del culto las conducciones de cadáveres con acompañamiento religioso, en cada defunción de un católico habría que pedir la autorización al gobernador, que si la concedía holgaba solicitarla nuevamente, y si la denegaba era ocioso formularla en ningún caso más.

«Así viene entendiéndose en la práctica; y en general las autoridades de la República, dando alto ejemplo de sentimientos de humanidad y por tanto de sana y verdadera democracia, no ponen obstáculo para que los repetidos actos tengan lugar sin exigir el previo requisito de la autorización gubernativa.

«Por otra parte la Ley de 30 de enero último no resuelve el aspecto legalista con que pretende informarse este asunto, porque sólo se refiere al acto de la inhumación pero no al de traslado de los cadáveres al cementerio.

«En tal sentido y seguro de que los alcaldes de la provincia y entidades que me formularon sus consultas reconocerán la procedencia de seguir una orientación tolerante y democrática que se armonice con los demás preceptos constitucionales que establecen la libertad de conciencia y el respeto para todas las ideas confesionales:

«He acordado que en lo sucesivo y sin perjuicio de las resoluciones que puedan adoptar las Cortes o el Gobierno de la República, las autoridades

*locales no pongan impedimento alguno a la celebración de los actos a que se contrae esta circular, cualesquiera que sea la religión que los inspire, quedando solo supeditadas al permiso de mi autoridad las procesiones y el desfile por la vía pública de análogos cortejos religiosos, que de modo expreso regula el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución.*****

Por su parte el gobernador civil de Murcia apuntaba en la misma idea en su circular de 6 de julio, en la que incluía literalmente algunos de los párrafos de las anteriormente transcritas.****

(228) En bastardilla en la publicación realizada por los boletines eclesíasticos,

(229) "La administración del Viático a los enfermos, con acompañamiento religioso, y la conducción de cadáveres al cementerio con asistencia del Clero y Cruz alzada, han sido considerados por algunos alcaldes de esta provincia, así como por determinadas organizaciones políticas y societarias, como manifestaciones externas del Culto, de las que requieren, según el artículo 27 de la vigente Constitución, permiso expreso, en cada caso, de este Gobierno civil para verificarse,

"Para deshacer esta creencia errónea y evitar reclamaciones y protestas que podrían llegar a producir alteraciones del orden, advierto a los señores alcaldes y demás autoridades y agentes dependientes de la misa, que la interpretación del expresado artículo 27 de la Constitución ha de hacerse ateniéndose al espíritu de amplia y democrática libertad que lo informa, sin que quepan interpretaciones personales que lo menoscaben en detrimento del prestigio de la autoridad,

"Las conducciones de cadáveres al cementerio, no pueden estimarse como manifestaciones externas de Culto, ya que en ellas la asistencia del Clero tiene un fin accesorio y no constituye una pública manifestación de fe religiosa a la que hace referencia el referido artículo 27, en su párrafo tercero,

"Se hace saber, por tanto, a las citadas autoridades locales, que no es necesaria la autorización gubernativa para la administración de Viáticos a los católicos ni para la asistencia de Clero a los entierros, como para cualquier otra formalidad ritual a los que profesen otra confesión cualquiera, hasta tanto que las Cortes no legisen sobre ello o el Gobierno no disponga otra cosa,

"Lo que se hace público por esta circular para conocimiento general y en particular de las autoridades llamadas a dar cumplimiento a lo que se dispone en la misma."

No era, sin embargo, tan amplio como estos criterios el mantenido por el gobernador civil de La Coruña que, a diferencia de los de su misma región, mantenía la necesidad de previa autorización para la celebración de los actos del ritual de acompañamiento de cadáveres, si bien dando la norma general de que fueran autorizados siempre que se cumieran estrictamente a tal acompañamiento, postura esta que encerraba una actitud más cautelosa tendente a controlar cualquier posible exceso por parte de los creyentes sobre lo autorizado. La referida actitud se expresaba en el telegrama enviado el 11 de julio a la alcaldía de Santiago:

"Siempre que lo deseen familiares, respetando voluntad muerto, y no tema alteración orden ni trátese derivar mero acto piadoso a propaganda partidista, puede V.E. autorizar entierros vía pública, cualquier religión con sus ritos acostumbrados." (130)

Otros gobernadores hubo más cautos que, lejos de tomar la iniciativa de dar su propia interpretación de la normativa constitucional, prefirieron evacuar la correspondiente consulta. Así haría, por ejemplo y que

- (230) Este telegrama, así como la circular del gobernador civil de Pontevedra fue publicado por el boletín eclesiástico de Santiago de Compostela (año 71, 15 de julio de 1932, núm. 2678). La referida circular fue reproducida primeramente por el boletín eclesiástico de Tuy (año 73, 30 de junio de 1932, núm. 13, págs. 225-226) y ésta y las aludidas de los restantes gobernadores civiles serían publicadas, entre los boletines eclesiásticos consultados, por los de las diócesis de Tarazona y Tudela (año 70, 15 de agosto de 1932, núm. 713, págs. 534-539), Orihuela (año 51, 1 de septiembre de 1932, núm. 14, págs. 310-314), Calahorra (año 73, 12 de septiembre de 1932, núm. 11, págs. 196-199), Barcelona (año 75, 15 de septiembre de 1932, núm. 17, págs. 348-352), Granada (año 78, 30 de noviembre de 1932, núm. 3514, págs. 316 y ss.), Madrid-Alcalá (año 47, 1 de octubre de 1932, núm. 1568, págs. 336-341) y Gerona (año 75, 28 de noviembre de 1932, núm. 13, págs. 327-337). La del gobernador civil de Lugo sería publicada por los boletines eclesiásticos de Mondoñedo (año 75, 5 de julio de 1932, núm. 13, págs. 126-127), Burgos, que señalaba que lo tomaba del de Lugo (año 75, 15 de julio de 1932, núm. 13, págs. 229-230) y Córdoba (año 75, 23 de agosto de 1932, núm. 14, págs. 192). En todos los casos estos documentos merecieron comentarios favorables de los redactores de los boletines diocesanos, incluyendo el de Orihuela esta nota que contrasta vivamente con la recomendación dada a sus párrocos por el arzobispo de Sevilla: "Hemos creído conveniente publicar estas circulares para que aparezca claro el criterio recto

sepamos, el gobernador civil de Logrono, como consecuencia, al parecer de una solicitud del propio episcopado, segun la noticia que publicaba el boletin eclesiastico de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, el cual indicaba que, a falta de normas concretas, los sacerdotes deberian proceder en la misma forma en que se venia haciendo.

"En entrevista celebrada con el Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia de Logrono, acerca de denuncias formuladas por agrupaciones politicas y de disposiciones tomadas por algunas Autoridades locales en orden a prohibir la asistencia del Clero con cruz alzada a los enterramientos y la administracion del Santo Viatico con acompaamiento liturgico; el Excelentisimo Sr. Gobernador, para evitar aquellas reclamaciones y protestas, y para prevenir cualquier alteracion de orden publico, estimo prudente dirigirse a los poderes publicos en demanda de normas concretas sobre el particular.

"Por tanto, hasta que dichas normas no fueren promulgadas por la Autoridad civil, los Sres. Párrocos continuaran asistiendo con su Clero a los entierros y Viaticos de los catolicos en la misma forma y con los mismos ritos con que han venido haciendolo hasta el presente."

Llegados a este punto es preciso senalar que no todas las instrucciones dictadas por los gobernadores civiles seguan la pauta marcada por las transcritas y, de ahí, que no fueran publicadas por los boletines eclesiasticos al no ser favorables a los intereses eclesiasticos. Como ejemplo de ello tenemos el caso de la provincia de Cuenca, cuya Junta de Sanidad acordo en noviembre de 1932 que el

seguido en la materia con sujecion a las disposiciones legales vigentes y los Sres. Párrocos procuren sostener y defender los derechos de la Iglesia si acaso en alguna localidad pretendiera el Sr. Alcalde denunciarlos e imponer exigencias que no deben consentirse."

(231) 8 de diciembre de 1932, "Secretaria de Camara y Gobierno.-Circular", BOE de Calahorra y Santo Domingo de la Calzada, año 73, 13 de diciembre de 1932, núm. 15, págs. 245-246.

traslado de cadáveres al cementerio se efectuaría sin acompañamiento, prohibiéndose llevar el féretro a hombros y la presencia del clero al sacar al fallecido de la casa mortuoria, medida que, aunque según se indicaba, se adoptaba por razones de higiene considerándose que con ella no se herían los sentimientos de los católicos, tenía por fundamental objeto evitar las manifestaciones públicas que, según se ponía en labios del gobernador, tenían "más de farsa que de impulso sincero." (222)

Más para mostrar claramente la disparidad de criterios que también en la esfera civil se dio en el tema que comentamos, queremos referirnos, por último, a la circular que, va a mediados de 1933 y una vez publicado el reglamento en desarrollo de la ley de cementerios, dictó el gobernador civil de Baleares. Circular en la que, en estas fechas, se ponía nuevamente de manifiesto la diversa actitud de las autoridades locales, conteniendo, por otra parte, una postura favorable a la interpretación eclesiástica, si bien, y tal como había hecho el gobernador civil de La Coruña, con las debidas cautelas en cuanto a posibles alteraciones de orden público; cautelas que, si no dejaban de dar, en uno y otro caso, una carta en blanco a las autoridades locales, en el de Baleares, al venir circunscritas en la orden general de autorización y con la intervención del propio

(232) "Acuerdos de la Junta provincial de Sanidad sobre la forma de realizar los entierros.- Cuenca, 22.- El gobernador civil ha manifestado a los periodistas que la Junta provincial de Sanidad había resuelto modificar la forma en que se han de realizar los entierros. Desde el 1 de diciembre los traslados al cementerio se efectuarán sin acompañamiento, y se prohíbe llevar el féretro a hombros, así como la presencia del clero en el momento en que el cadáver ha de ser sacado de la casa mortuoria. Añade el gobernador que con esta medida no se ataca a los sentimientos católicos, y sin embargo, se toma una medida higiénica de extraordinaria importancia, evitando las manifestaciones públicas, pues siempre han tenido más de farsa que de impulso sincero.

El acompañamiento de los cadáveres no se prohíbe, pero será en automóviles, con objeto de que se evite en lo posible el espectáculo del entierro por las calles." "El Sol", 23 de noviembre de 1932.

gobierno civil, en su caso, también daban las correspondientes garantías a los católicos ante posibles actitudes arbitrarias por parte de los ediles municipales.

"Con el fin de unificar las normas a seguir en materia de entierros y manifestaciones de carácter religioso, evitando la diversidad de criterios y que dentro de la provincia se autorice en unos pueblos lo que en otros no se permite o se ponen impedimentos, he acordado llamar la atención de los Sres. Alcaldes acerca de la distinción que deben hacer entre una manifestación pública del culto católico (procesión) y el séquito con cruz alzada de un entierro católico, manifestaciones que el párrafo 38 del artículo 27 de la constitución de la República Española admite aunque supeditadas en cada caso a la autorización del Gobierno que en los pueblos corresponde a la Alcaldía.

«Deben los Señores Alcaldes autorizar, sin poner impedimento alguno, los entierros católicos, aunque sean con cruz alzada, salvo el caso de que tengan fundadas sospechas de que se ha de alterar el orden, en cuyo caso lo pondrán inmediatamente en conocimiento de este Gobierno, para circular las ordenes convenientes a la Guardia civil, con el fin de evitar cualquier conato de perturbación.

«Palma, 20 de mayo de 1933.- El Gobernador, *Manuel Ciges Aparicio*." (233)

(233) 20 de mayo de 1933, "Disposiciones del Poder civil.- Gobierno Civil de Baleares.- Circular", BOE de Mallorca, año 73, 31 de mayo de 1933, núm. 10, pág. 165,

5.2. Las conferencias de metropolitanos.

Como ha quedado puesto de manifiesto, la atención de la iglesia española sobre la cuestión de la conducción de los enterramientos estuvo centrada únicamente en el periodo de febrero a abril de 1932 y no volvió a ser planteado ni siquiera con la publicación del reglamento de 8 de abril de 1933, por el cual, por otra parte, en su capítulo IV, que trataba "Del carácter de los enterramientos" no entraba

(134) Entre los boletines consultados tan solo hemos encontrado por estas fechas la publicación efectuada por el de las diócesis de Tarazona y Tudela de la circular dictada por el gobernador civil de Almería el 9 de diciembre de 1932, es decir, antes de la aparición del reglamento. Esta circular, como las aquí examinadas de otros gobernadores, sostenía que la conducción de enterramientos no era manifestación pública de culto y, por tanto, no precisaba de la autorización que determinaba el artículo 27 de la Constitución, si bien reconocía la facultad de los Alcaldes de comprobar si el difunto había hecho manifestación expresa de voluntad de que deseaba un entierro según el ritual de su religión.

"Diariamente llegan a este Gobierno quejas y denuncias relativas a las normas que las autoridades municipales imponen para la celebración de los entierros católicos en sus respectivos términos, y que las más de las veces producen excitación de ánimos y hieren sentimientos que precisa respetar; y en su consecuencia, y para que todas las Alcaldías de la provincia sepan a que atenerse en lo sucesivo, evitando con ello la reproducción de denuncias que siempre son enojosas, hago constar por la presente, que la interpretación del artículo 27 de la Constitución de la República, debe hacerse ateniéndose a la letra y al espíritu de amplia y democrática libertad de conciencia y culto, sin aplicación por nadie de criterios ni ideas personales que menen el prestigio de la Autoridad, que es la encargada precisamente de hacer cumplir la ley en su verdadero y desinteresado sentido; bien entendido, que la conducción de un cadáver al Cementerio, cualquiera que sea la religión que profesare en vida el difunto, no puede estimarse como manifestación pública del culto católico, ya que la asistencia del Clero Parroquial sólo llena el deseo expresado antes de morir por el finado, que, como ciudadano, tuvo derecho a profesar la fe de sus creencias al amparo de un precepto legal.

Por lo tanto, queda sentado que para la asistencia de la Parroquia a los entierros y vísticos de los católicos, no precisa el permiso de la Autoridad gubernativa, y si solo para las procesiones religiosas, porque estas si constituyen una manifestación pública del culto, pudiendo los Alcaldes siempre, si así lo estiman oportuno, proceder a comprobar si la persona fallecida,

-lógicamente, pues era una cuestión ajena al objeto de su regulación-, en el tema, determinando únicamente la cuestión de la declaración de enterramiento, de la que seguidamente hablaremos, y, en el artículo 44, la de la celebración, en su caso, de los ritos funerarios de los distintos cultos ante cada sepultura."***

En la conferencia de metropolitanos de noviembre de 1932, fue tratada esta cuestión conjuntamente con la problemática, muy similar, que planteaba la liturgia del viático, puntos ambos sobre los que incidía la regulación constitucional. La conferencia de 1933 no abordó este tema.

Así, el apartado dos del punto octavo del acta final de 1932 señalaba:

"El art. 27 de la Constitución establece, desgraciadamente, que "las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno", lo cual ciertamente comprende a las procesiones, y, por tanto, cuando se juzgue conveniente celebrarias, debe pedirse permiso por escrito a los Gobernadores o Alcaldes, por el rector de la iglesia donde se organice la procesión.- Por Gobernadores y Alcaldes se han dado hasta hoy interpretaciones opuestas sobre la necesidad o no de solicitar permiso en cada caso para los viáticos y entierros religiosos. Mientras no haya una declaración del Poder civil de carácter general que obligue a solicitar tal permiso, los Prelados deben sostener el criterio que no son manifestaciones públicas sujetas al mencionado precepto constitucional, pero si la

habiendo cumplido la edad de 20 años, dejó dispuesto, de manera expresa, que su enterramiento tuviera carácter religioso, así previene el art. 42 de la Ley de 30 de enero del año actual."

(9 de diciembre de 1932, "Viáticos y entierros católicos.- Circular", BOE de Irazola y Irujo, año 71, 15 de abril de 1933, num. 729, págs. 226-227)

autoridad civil sostiene el criterio opuesto en algun lugar, solicitese el permiso para cada caso." (236)

De esta forma en la conferencia se habia llegado a una postura de acatamiento a la autoridad civil, ya que si bien los distintos obispos debian mantener que las conducciones de enterramientos no eran manifestaciones publicas de culto, se aconsejaba que, en caso de que la autoridad civil discrepara de tal criterio, se solicitara la autorización pertinente, como si de procesiones se tratara.

La inclusion de este punto en los debates, tanto de la conferencia de metropolitanos como en las preparatorias de las distintas provincias eclesiasticas, respondia a las propuestas hechas por los obispos de Menorca y de Almeria. Asi, el arzobispo de Valencia, Dr. MELO Y ALCALDE, al enviar al cardenal VIDAL el 14 de julio de 1932 las respuestas recibidas de los sufraganeos de su provincia sobre los temas que, a su juicio, deberian ser abordados por la conferencia de metropolitanos, incluia, al transcribir las de los obispos de Menorca- diócesis de la que era titular el licenciado Juan TORRES Y RIBAS y coadjutor con derecho a sucesión el licenciado Antonio CARDONA Y RIERA, obispo de Quersoneso- el siguiente párrafo:

"22. Reiterada protesta contra las disposiciones gubernamentales, que hacen imposible en gran parte los entierros litúrgicos y los Viáticos solemnes, solicitando disposiciones claras y terminantes, que garanticen los derechos de la Iglesia." (237)

Por su parte, el Dr. Bernardo MARTÍNEZ NOVAL, obispo de Almeria, insistiria también en este punto, como se desprende de la carta sin fecha enviada probablemente a

(236) *Església i Estat durant la segona...*, III, pág. 332-333.

(237) *Op. cit.*, III, pág. 335.

mediados de agosto de 1932 por el obispo de Jaén, Dr. Manuel BASULLO JIMENEZ, al cardenal VIDAL y en la que, al recoger los puntos propuestos por los sufragáneos de la provincia granatense, transcribía los apuntados por el Dr. MARINNEZ NUVAL, único de esta zona que aludió a la cuestión de los cementerios.

"Pedir, si se estima oportuno, una declaración oficial en el sentido de que la conducción de cadáveres y el llevar el s'mo. viático a los enfermos no constituyen manifestaciones religiosas, a los efectos de no necesitar la competente autorización de la autoridad civil."''''

Pero esta postura, en la misma línea que la sugerida por los obispos de Menorca, aunque en muy distinto tono, no fue, como hemos visto, la recogida por el acta final de la conferencia, no creyendo, por tanto, oportuno los metropolitanos erectuar una protesta formal ni mucho menos pedir aclaraciones del gobierno, las cuales, se suponía en el acta, ya emanarían de este. Probablemente dicha actitud de los metropolitanos respondía a la necesidad de reservar todo gesto de protesta y toda petición al gobierno para el proyecto de ley sobre confesiones y congregaciones religiosas.'''''

Por su parte las conferencias de sufragáneos, preparatorias de la de los metropolitanos, no habían prestado a este punto demasiada atención, sobre todo si se lo compara con la dedicación que se dio a otros, por ejemplo el del presupuesto de culto y clero, que sería el mas

(238) Op. cit., III, pag. 348.

(239) Recordamos que uno de los dos "temas adicionales" del acta, figuraba "Que los Excmos. Sres. Cardenales de Tarragona y Sevilla visiten, en nombre de los Rmos. Metropolitanos, al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros para las debidas protestas y observaciones con motivo del Proyecto de Ley sobre Confesiones y Congregaciones, que se de publicidad a dicha visita por medio de una nota, que se publique un Documento colectivo, si se aprueba la Ley." Op. cit., III, pag. 334.

tratado.⁽²⁴⁰⁾ Fue analizado por la conferencia de la provincia eclesiástica de Valencia, recogiendo, como se ha apuntado, el sentir de los obispos de Menorca:

"Entierros y Viáticos.- No pueden considerarse, como procesiones, aunque si sean, en cierto sentido, manifestaciones de carácter religioso. Es de gran necesidad que se den por las Autoridades Superiores normas concretas, que eviten esa serie infinita de conflictos, creados por autoridades locales poco comprensivas. No veríamos inconveniente en que los Viáticos se administren sin aparato exterior. Tal vez así pudiera obtenerse, como compensación, la autorización de los entierros."⁽²⁴¹⁾

También lo fue por la conferencia de la provincia eclesiástica hispalense, pero en el acta de esta, en lugar de aportarse alguna sugerencia respecto a la actuación que debería seguirse, tan sólo se recogía la situación de esta problemática con especial referencia a la provincia:

"No hay ley general que prohíba llevar públicamente el Viático a los enfermos ni asistir el clero a los entierros; no faltan, sin embargo, Gobernadores y Alcaldes que llegan a prohibir y aun multar a los sacerdotes que intervienen en ellos; en esta Provincia eclesiástica no es irrecuente que la autoridad prohíba estos actos, pero si se inhibe a veces cuando se acude a ella para hacer las debidas reclamaciones por los desajustes de algunos Alcaldes."⁽²⁴²⁾

Las restantes sugerencias de la jerarquía sobre este tema fueron hechas al cardenal VIDAL en la correspondencia mantenida con él por los obispos de las provincias eclesiásticas que no habían podido reunirse en conferencia, aunque tan sólo fue tratado, y a veces muy superficialmente, por cuatro obispos.

(240) Ver el apéndice sobre "El presupuesto de culto y clero".

(241) Op. cit. III, pág. 402.

(242) Op. cit. III, pág. 388-389.

Así, en la carta enviada al arzobispo de Tarragona por el Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE, obispo de Salamanca, el 21 de octubre de 1932, se señalaba simplemente que "Cada Gobernador y cada Alcalde tienen distinto criterio en cuanto a entierros y viáticos, y no hay practicamente apelacion juridica."⁽²⁴³⁾ El obispo de Astorga, Dr. Antonio SENSO LAZARO, reiteraba, en carta de 27 de octubre, la necesidad de que se pidiera una declaración expresa del gobierno: "Convendria sobremanera que el Episcopado se dirigiera al Gobierno... exigiendo que aclare de una vez lo que se entiende por acto de culto publico en relacion con entierros y viáticos".⁽²⁴⁴⁾ El obispo de Zamora, Dr. Manuel ARCE OCHOTORENA, indicaba, por su parte, en la carta escrita al cardenal VIDAL el 28 de octubre, que deberia observarse el rito liturgico en la conduccion de cadaveres al cementerio, donde la autoridad no lo impidiera. ⁽²⁴⁵⁾ y, por ultimo y como ya hemos indicado, el Dr. Enrique PLA Y DENIEL, obispo de Avila, abundaba, en su carta sin fecha, en la idea de la necesidad de pedir una aclaracion al gobierno, si bien, frente a la "exigencia" a que aludia el de Astorga, hacia depender tal peticion de la oportunidad en formularla: "Seria oportuno obtener la declaración general de la permisión de los entierros y viaticos, pero la declaracion no debe pedirse si hay peligro de que se niegue, y esperar ocasion mas oportuna."⁽²⁴⁶⁾

(243) Op. cit. III, pág. 405.

(244) Op. cit. III, pág. 409.

(245) Op. cit. III, pág. 412.

(246) Op. cit. III, pág. 414.

6. La declaracion de enterramiento católico.-
 Obispos y arzobispos de Toledo, Tarragona, Tui,
 Gerona, Burgos, Vich, Granada, Zaragoza, Astorga,
 Salamanca, Oviedo, Avila, Barcelona, Leon, Calahorra
 y La Calzada, Segovia, Uribuea, Madrid-Alcala,
 Sevilla, Zaragoza (administracion apostolica de
 Judela), Vitoria, Valladolid y Santiago de
 Compostela.

Si duro era el contenido de la ley de secularizacion
 de cementerios para la conciencia catolica, una de sus
 disposiciones que mas podian herirle era la contenida en el
 articulo cuarto, dictado con el proposito de desvirtuar la
 que hasta entonces habia sido potestad sancionadora de la
 iglesia mediante la privacion de sepultura religiosa a los
 que no considerara dignos de ella, asi como con el de
 defender el derecho de los que quisieran ser enterrados al
 margen de toda intervencion eclesiastica, haciendo
 desaparecer de tal derecho todas las connotaciones
 negativas, tanto religiosas como sociales, que hasta
 entonces habia tenido.

Pero si bien la existencia de cementerios sin
 distincion confesional alguna, y en los que la celebracion
 de los ritos de las distintas confesiones se circunscribia a
 cada sepultura, podia ampararse en un deseo de igualdad para
 todos los ciudadanos -aunque siempre cupiera la matizacion
 de ignorar la realidad social espanola-, el obligar a hacer
 una declaracion expresa en el caso de que se deseara
 enterramiento religioso, no dejaba de ser un atentado
 directo contra todos los catolicos -la gran mayoria, aunque
 igual sucedia, desde luego, con los miembros de otras

creencias- toda vez que, si lo que se pretendía era la igualdad de todos ante la ley, no cabe duda que obligar a realizar tal declaración únicamente a los que desearan tener enterramiento religioso, iba en contra de dicho principio y, en tal sentido, tanto el decreto de 9 de julio de 1931 como el proyecto de ley presentado por el gobierno a las Cortes, habían sido más respetuosos, como hemos señalado, ya que en ambos la declaración de voluntad sobre el carácter de enterramiento debería efectuarse en todos los casos, se deseara o no que este fuera religioso, de forma que la falta de declaración no pasaba a ser entendida automáticamente, como por la ley de secularización de cementerios se hacía, como un deseo de no tener enterramiento de tal carácter.⁽²⁴⁷⁾

La gravedad de esta imposición para todos los católicos dio lugar a una profusión de escritos de la jerarquía, centrados especialmente en los meses de febrero a abril de 1932. Tales escritos eran o las pastorales y circulares genéricas sobre cementerios a las que ya hemos ido haciendo referencia en los epígrafes anteriores, o documentos que analizaban únicamente esta disposición al

(247) Ver la nota núm. 3 y el apéndice núm. 1.

Como se ve el pensamiento de los prohombres de la República sufrió aquí una evolución hasta desembocar en la imposición más extrema, imposición que CUENCA TORIBIO achaca al deseo de violentar la marcha de las tentativas transformadoras, dada su conciencia del "lardiado ritmo de las mudanzas religiosas en los países subdesarrollados". Dicho autor pone, precisamente, como primer ejemplo de estas tentativas transformadoras la obligación de la declaración de enterramiento religioso, obligación que atribuye al interés en desvirtuar "las connotaciones simbólicas que en un país tan dado a lo tanático como España tenía en la época" y anotando seguidamente que el haber regulado lo contrario hubiera sido una actitud "sin duda, más adecuada a la mentalidad de la mayoría del país." (CUENCA TORIBIO, José Manuel, *Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-1985)*, Madrid, 1985, pág. 47). Estando completamente de acuerdo con este planteamiento, destacamos en este epígrafe no solo el deseo de los hombres del régimen en contribuir a secularizar con esta nueva aedida las costumbres españolas, sino también el de acabar con la prerrogativa decisoria, y en casos sancionadora, de la Iglesia sobre el carácter del enterramiento; cuestión esta que indudablemente no podía ser admisible por las mentes más progresistas del momento.

tiempo que daban normas o instrucciones a los fieles sobre ella, o por ultimo, avisos o circulares que se limitaban a dar dichas instrucciones.

Uno de los documentos mas completos sobre el citado articulo cuarto y el primero en orden cronologico que hemos encontrado en los boletines eclesiasticos analizados, fue la extensa "Circular sobre entierros religiosos" que, recién promulgada la ley, dictó el Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO, obispo de Aretusa y vicario capitular de Toledo, y que, por el interés de su contenido y el hecho de que su fecha de aparicion permite aventurar que sirviera de modelo a otros miembros del episcopado, reproducimos íntegramente en el apéndice correspondiente.

La circular, tras recoger el contenido de la nueva disposicion, destacaba lo anómalo que en la tradicion española era la falta de entierro religioso, porque, contrariamente a lo que la ley venia a establecer, la suposición de que todos los un día bautizados perseveraban en la fe era predominante, considerándose por las familias una pena gravísima el que pudiera enterrarse a uno de sus deudos sin el tradicional ritual católico. Y era tan anómalo el contenido de la norma que podía llegar a darse el caso de que, por no haber cumplido el requisito de manifestar su voluntad, incluso sacerdotes ejemplares quedaran sin sepultura eclesiástica.

No correspondia la disposicion a la situación religiosa española, siendo antidemocrático "legislar en favor de una pequenísima minoría imponiendo un gravamen a los que constituyen la casi totalidad de la Nación."

Con notorio abuso de la autoridad municipal, ya se habian dado en la archidiócesis casos en que, a pesar de la voluntad del difunto, se habia practicado su sepelio sin

rito alguno religioso; por ello menester era, al margen de las actuaciones pertinentes, tomar las debidas precauciones a fin de evitar estos hechos, y, así, se recomendaba a todos los fieles que manifestaran expresamente su voluntad de ser enterrados de acuerdo con lo establecido por la Iglesia, a cuyo fin se insertaba un formulario a utilizar y se informaba que por parte de algun notario se habia hecho el otorgamiento de dar fe de esta voluntad mediante un modico arancel.

Para el delicado caso de los menores de veinte años, cuya voluntad habia de ser interpretada por sus representantes legales, se aconsejaba a los parrocos que determinaran si, en circunstancias especiales, debian aconsejar a los menores que hicieran por escrito su declaracion.

En todos los casos era conveniente que la declaracion se hiciera por duplicado, conservando el interesado un ejemplar y otro el parroco, o el sacerdote que, si se trataba de personas acogidas a establecimientos beneficos o internadas en hospitales, estuviera encargado de su asistencia espiritual.

Por ultimo la circular daba instrucciones sobre la custodia de las declaraciones de voluntad y sobre la forma de ejecutarla los sacerdotes y religiosos.***

El mismo numero del boletin eclesiastico de Toledo que publicaba la circular del Dr. ROCHA PIZARRO incluia el texto de la ley de cementerios y las "Observaciones" a la misma a las que ya nos hemos referido; observaciones que, tras enjuiciar en forma generica el contenido de la norma, dedicaban especial atencion al tema de la declaracion de

(248) 14 de febrero de 1932, "Circular sobre entierros religiosos", BOE de Toledo, año 88, 16 de febrero de 1932, num. 4, págs. 56-58. Ver el apendice num. II.

enterramiento, analizando las disposiciones del artículo cuarto, cuyo objeto, según el comentarista, no era otro que dificultar los entierros católicos -prácticamente los únicos de carácter religioso que se efectuaban en España- y hacer que se realizaran más entierros civiles, conclusión esta a la que llegaba por esa falta de fe, tantas veces vista, de la jerarquía eclesiástica en la actuación de los fieles.

"Claramente se advierte que el fin de este artículo no es salvaguardar la libertad religiosa, sino el poner trabas para los enterramientos conforme a los ritos católicos.

"Ciertamente que se prohíbe que los enterramientos tengan "carácter religioso alguno"; pero ¿qué enterramientos tienen carácter religioso en España, fuera de los de los católicos?

"Exigir esa declaración expresa no solo es innecesario, sino incongruente. ¿Qué más declaración puede pedirse que el haber recibido el bautismo por el cual se ingresa en la Iglesia, sobre todo si esa primera "declaración" va ratificada por una vida de prácticas católicas y por una muerte cristiana?

"Aun para los que no admitan el dogma cristiano es innegable que el bautismo es una declaración de catolicismo. ¿Que el bautismo suele recibirse cuando aun no se tiene uso de razón? Pues cuando menos procedía considerarlo como expresión de la voluntad de los padres, que debe respetarse mientras no sea expresamente rectificada. No cabe, pues, suponer en los que mueran sin hacer declaración expresa de voluntad el deseo de ser enterrados sin los ritos católicos, sino al contrario.

"Mediante ese artículo se conseguirá aumentar el número de enterramientos civiles, que de otra manera serían muy escasos. Por pereza, por falta de tiempo, por otras diversas causas, serán muchos los que mueran sin declarar su voluntad de manera expresa. Y se dará frecuentemente el caso de que quien vivió y murió cristianamente sea enterrado sin la bendición de la Iglesia."



A continuación de estas observaciones a la ley, el boletín eclesiástico incluía "Algunos casos prácticos" que de ella podían derivarse, refiriéndose los tres últimos a la declaración de enterramiento; en el primero se apuntaba que la ley no exigía que se efectuara mediante testamento; en el segundo que, según el texto legal, no era necesario que se hiciera por escrito, bastando de palabra, siempre que pudiera probarse, mas siendo lo prudente que se realizara por escrito. El tercer caso, por último, se refería a la cuestión de la declaración de los menores de veinte años, a los que recomendaba que la efectuaran a partir de los catorce años o edad de testar.

"¿Pueden los menores de veinte años hacer declaración expresa de su voluntad de recibir sepultura eclesiástica? La ley expresamente lo permite, y su voluntad debiera ser respetada. No determina la Ley la edad desde la cual pueden expresar su voluntad; pero puesto que, en teniendo catorce años pueden testar, pueden también expresar su voluntad de ser enterrados según los ritos de la Iglesia." (249)

También al artículo cuarto de la ley se había referido el arzobispo de Tarragona, Dr. VIDAL Y BARRAQUER en su ya comentada pastoral de 21 de febrero de 1932 en la que, tras destacar como la inmensa mayoría de los españoles había recibido el bautismo y era reducido el número de los que habin adjurado de la fe, "salva expresa declaración de la Iglesia en contra, tienen aquellos pleno derecho a la sepultura eclesiástica con las solemnidades propias de la sagrada liturgia."

"Existe, pues, en buenos principios jurídicos, mientras no se pruebe lo contrario, la presunción favorable de que la mayor parte de los ciudadanos desea recibir el indicado sepelio, como ha sucedido hasta el presente; de donde se sigue que,

(249) s.1, "La ley sobre cementerios", BOE de Toledo, año 88, 16 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 62-65.

al invertirse los terminos, al obligarse a manifestar su voluntad no a la minoría, sino a quienes tienen la presunción en su favor, se da una nueva norma de derecho procesal, que sólo un extremismo sectario puede haber inspirado."

Pese a ello, el cardenal urgía a sus diocesanos a que se aprestaran a efectuar la declaración de voluntad que la ley determinaba, anunciando a los párrocos que se les daban las oportunas instrucciones para su debida actuación cerca de los fieles,⁽²⁵⁰⁾ y finalizaba su tratamiento del tema con unas sentidas frases sobre la nueva ley y la postura a mantener ante las dificultades que su aplicación entrañaría, frases que, una vez más, son expresivas del talante pacificador que acompañó siempre al arzobispo de Tarragona ante los hechos de la República:

"Fuerte es la prueba por la que está pasando la Iglesia en nuestra Patria, dura es la ley de que Nos ocupamos; mas tened en cuenta que la fortaleza en la defensa de nuestros derechos, acompañada de la dulzura, de la prudencia y de la dignidad, tan propicias del cristiano, junto con el auxilio del Señor, os llevarán por buen camino a solucionar armónicamente las múltiples dificultades que se presentarán al aplicarse la ley de referencia."⁽²⁵¹⁾

La "Instrucción Pastoral" que, en protesta por la ley de secularización de cementerios, suscribió el obispo de Tuy, también dedicaba una concreta y dura crítica a la disposición relativa a la obligatoriedad de efectuar la declaración de voluntad de enterramiento católico, defendiendo las prerrogativas de la Iglesia y los derechos

(250) El desarrollo de estas actuaciones fue efectuado en las "Breves anotaciones a la ley de secularización de cementerios" publicadas en el núm. 31 del boletín eclesialístico de Tarragona, de 5 de marzo de 1932; a ellas aludiremos más adelante.

(251) 21 de febrero de 1932, "Pastoral de Cuarema", BOE de Tarragona, año, 42, 29 de febrero de 1932, núm. 30, págs. 529-575.

de los fieles para determinar el carácter de este, prerrogativas y derechos que no podían ser constreñidos por los requisitos añadidos que ahora imponía el Estado

"Esta disposición es ciertamente contraria a la ley de la Iglesia y a la jurisdicción misma que Jesucristo le concedió. No es el Estado civil quien da o quita el carácter religioso del entierro. La religiosidad depende de la jurisdicción religiosa; la religiosidad católica puede darla o quitarla a un acto la jurisdicción religiosa católica, y ésta compete total y únicamente a la Iglesia.

"Además: el derecho a la sepultura con carácter religioso católico es un derecho que lo tiene un fiel católico por serlo y para que lo tenga no se requiere ni puede requerirse que llene tal condición, la de haber dispuesto de manera expresa que quiere que su enterramiento tenga carácter religioso; porque siendo católico, lo racional y lógico es tener por cierto que quiere ser enterrado como la Iglesia católica desea y ordena y manda que sus hijos sean enterrados."

El contenido del artículo cuarto de la ley era, además, expresión del afán secularizador del régimen republicano, que suponía que todos los ciudadanos españoles participaban de sus mismas ideas, suposición a todas luces imprecisa y que podía dar lugar a numerosos conflictos caso de aplicarse lo establecido en dicho artículo.

"Esta disposición es prueba palmaria del laicismo imperante. Los legisladores laicistas suponen que todos los ciudadanos españoles son laicistas también y que si no expresan lo contrario, hay que dar por seguro que están divorciados de toda idea, sentimiento y práctica religiosa. Y mirando a la realidad de la vida española ¿quién puede noblemente afirmar que sea verdad suposición tan ofensiva para los millones y millones de católicos que hay en España? ¡A qué conflictos, dolorosísimos, no se llegaría si se aplicase la disposición legal que comentamos!"

Tal disposición no podía, pues, aplicarse, pero como medida cautelar y dada la certidumbre de que, pese a

las protestas episcopales, la ley, como tal, habia de ser aplicada, el obispo recomendaba a los fieles la realizacion de la declaracion.

"No puede aplicarse prudentemente; pero para evitar conflictos y sinsabores, conviene mucho que todos los que tienen cumplidos veinte años, de manera expresa dispongan que desean que su enterramiento tenga caracter religioso catolico."

Lo dicho con caracter general para todas las declaraciones de voluntad era tambien aplicable para el caso de los entierros de los menores de veinte años o incapacitados, respecto a los cuales la ley remitia a la interpretacion que de su voluntad hicieran sus familiares, razon por la que el prelado, sin aludir a la conveniencia de que aquellos efectuaran la declaracion, se limitaba a insistir acerca de estos para que el entierro tuviera caracter sagrado, lo cual era para el una prueba mas de la fortaleza cristiana con la que era preciso enfrentarse al laicismo que queria informar toda la vida espanola.

"A esta parte de la ley cuadran observaciones semejantes, por no decir iguales a las que hemos hecho a la primera y por lo mismo no insistimos; pero amonestamos en el Señor a todas las familias cristianas para que con espíritu de obediencia a las leyes de la Santa Iglesia y con espíritu de caridad y de respeto a los derechos catolicos de sus familiares fallecidos antes de cumplir los veinte años, procuren que su enterramiento tenga caracter catolico y resistan con fortaleza cristiana contra este oleaje horrendo de laicismo, que quiere arrancar a Cristo de toda la vida nacional, familiar e individual espanola."***

(252) 24 de febrero de 1932, "Instrucción Pastoral acerca de los Cementerios y protesta razonada contra la secularización de los mismos", BUE de Iuv, año 73, 29 de febrero de 1932, num. 4, págs. 71-90.

Tambien el obispo de Gerona, Dr. José VILA Y MARFÍNEZ, en sus comentarios de 26 de febrero de 1932 a la ley de cementerios hacia una expresiva protesta sobre el contenido del articulo cuarto, contrario al sentir general del pueblo español.

"Ante todo hacemos constar la pena y pesar que hemos experimentado al leer esta ley por el agravio que iniere a los derechos y canones de la Santa Iglesia y a los catolicos sentimientos de la mayoría de los españoles, de los cuales se hace caso omiso o se les trata como si fueran una excepción o pequeña minoría. El legislador prescinde en absoluto y no concede valor alguno a la presunción razonable, justificada y expresiva de que quiere morir y ser enterrado segun el rito de su religion aquel que externa y publicamente a la misma esta arillado durante su vida y conforme a ella ha venido practicando. Segun esta ley, ni el enterramiento de los fieles católicos tendra caracter religioso si por cualquier causa no hubiesen manifestado su voluntad, *disponiendolo de manera expresa*,⁽²⁵³⁾ de recibir sepultura cristiana. El hecho de ser bautizado sin haber apostatado, la práctica constante y ejemplar de una vida cristiana, la frecuencia de sacramentos, la recepcion de los ultimos, aun el mismo caracter sacerdotal y la profesion religiosa podran ser recusados como testimonio rehaciente de la tal disposición expresa de voluntad?...tememos que la intolerancia y el sectarismo agravaran en la práctica esta ley y así es muy probable que no falten quienes, contestando afirmativamente a nuestra pregunta, interpreten y apliquen esta ley. Por los motivos expuestos, entendemos que faltaríamos a nuestro mas elemental deber si no expresáramos publicamente, con nuestro sentimiento y dolor, nuestra enérgica y respetuosa protesta."

Tras esta introducción, se insertaban las normas sobre incautación de cementerios ya aludidas y las pertinentes sobre la declaración de enterramiento, que seguian, en líneas generales, las dadas por el vicario capitular de Toledo, si bien el Dr. VILA no se referiria expresamente a la declaración de sacerdotes y religiosas, ni aludiria a la

(253) En bastardilla en el original.

de los menores de veinte años, y, en lugar de hablar directamente a sus diocesanos, dejaba a la "prudencia, celo y discreción" de los parrocos la forma en que aquellos debían ser orientados con el fin de que manifestaran su voluntad sobre el carácter religioso del enterramiento. Añadía, por último, el siguiente párrafo sobre la necesidad de reacción ante posibles arbitrariedades:

"No es temerario pensar que ocurra algún caso en que por un abuso de fuerza se pretenda imponer el enterramiento contra la manifiesta voluntad del difunto. Es preciso, entonces, que inmediatamente sus causahabientes protesten ante testigos, y si la protesta no surte efecto entablen luego recurso en forma hasta su fallo, ya que si se dejara pasar un caso sin el correspondiente reconocimiento del derecho y la sanción pertinente, muy difícilmente se podrá en lo sucesivo hacer valer tal derecho ante quienes lo denegaron." (254)

A diferencia de los anteriores, el arzobispo de Burgos no haría comentario sobre esta disposición legal, limitándose el boletín eclesiástico a señalar que debería prevenirse a los fieles para que suscribieran "inmediatamente" un documento por triplicado expresando su voluntad, y anunciando la existencia de impresos para este objeto, los cuales deberían cumplimentar todos los mayores de veinte años, a no ser que suplieran este requisito mediante cláusula testamentaria. (255)

Esta recomendación se repetiría en las "instrucciones" que daba el 8 de marzo de 1932 el Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, contestando a consultas de sus sacerdotes y en las que ordenaba, siguiendo la pauta dada por el Dr. ROCHA PIZARRO, el establecimiento inmediato en cada

(254) 26 de febrero de 1932, "Ley de secularización de cementerios", BOE de Gerona, año 76, 29 de febrero de 1932, núm. 2, págs. 60-64.

(255) s.f. "Interesante a toda persona católica", BOE de Burgos, año 75, 15 de febrero de 1932, núm. 3, págs. 80-82 y 29 de febrero de 1932, núm. 4, pág. 103.

parroquia de un archivo secreto en que se custodiaran las declaraciones de los fieles.'''²⁵⁶

Las mismas concisas instrucciones daba el "Aviso" publicado en el boletín diocesano de Vich, aunque en él se incluía, además, una protesta por el "sectarismo antirreligioso" de la ley, "que lleva el laicismo mas allá de la muerte exigiendo a los católicos una declaración de voluntad para que se les permita ser enterrados con los ritos y ceremonias de la Iglesia."''²⁵⁷

Más sucinta aún sería la publicación efectuada por el boletín eclesiástico de Granada, que, bajo la firma de su canónigo-canciller, se limitaba a insertar el artículo cuarto de la ley y, a continuación, publicaba el modelo de impreso para efectuar la declaración de voluntad de enterramiento católico.'''²⁵⁸

La circular de 28 de febrero de 1932 del Dr. Rigoberto DOMENECH VALLS, arzobispo de Zaragoza, daba instrucciones a sus fieles sobre la forma en que debía efectuarse la declaración (por escrito y con dos testigos y, como medida precautoria, en el testamento), insertando a continuación, como el resto de los boletines eclesiásticos, un modelo de declaración.'''²⁵⁹

-
- (256) 8 de marzo de 1932, "Instrucciones.- A nuestros sacerdotes", BOE de Burgos, 15 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 111-113.
 - (257) 27 de febrero de 1932, "Cementerios", BOE de Vich, año 78, 29 de febrero de 1932, núm. 2092, págs. 70-72.
 - (258) 11 de marzo de 1932, "Secularización de cementerios", BOE de Granada, año 87, 15 de marzo de 1932, núm. 3498, págs. 68-69.
 - (259) 28 de febrero de 1932, "Circular núm. 7.- Sobre entierros católicos", BOE de Zaragoza, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 98-99.

Las "Breves notas aclaratorias a la nueva Ley de Cementerios" publicadas por el provisor y vicario general de la diócesis de Astorga, D. Mariano FLOREZ, tras señalar la conveniencia de que todos los fieles "y aun los sacerdotes y religiosos", hicieran constar su voluntad sobre el carácter religioso de su enterramiento "lo que podía realizarse o bien por testamento, o bien por escrito con su firma o, si no sabían firmar con la de dos testigos, o bien de palabra ante testigos" incluía un confuso párrafo tendente a dejar a salvo la potestad sancionadora de la Iglesia, a la que siempre cabría la posibilidad de negar la sepultura religiosa. Este párrafo, en efecto, establecía un contraste entre funerales celebrados en la iglesia e inhumación sin carácter religioso, cuando la ley autorizaba expresamente la celebración de los ritos litúrgicos ante cada sepultura en los cementerios municipales, por lo que carecía de fundamento la hipótesis que planteaba:

"Notese que, como lo dispuesto en este artículo se refiere únicamente al enterramiento¹ en el cementerio municipal,² los funerales pueden celebrarse libremente en la iglesia, aunque la inhumación se haya hecho sin carácter religioso, a menos que se trate del caso de privación canónica de sepultura eclesiástica, ya que el derecho de la Iglesia a conceder o negar sepultura eclesiástica en nada es afectado por esta ley de cementerios.

«Por tanto, en lo sucesivo la Iglesia continuara usando de este derecho con absoluta independencia; aunque, cuando el cementerio del pueblo sea municipal,³ la pena de privación de sepultura eclesiástica habra de limitarse a la privación de ritos eclesiásticos y de funerales, por el carácter común que en adelante han de tener estos cementerios."⁴

(260) En bastardilla en el original.

(261) BOE de Astorga, año 80, 1 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 81-89. El número siguiente del boletín de esta diócesis publicaría una circular de la vicaría general con fecha 14 de marzo de 1932 en la que, para dar cumplimiento a estas "notas aclaratorias", se disponía que los sacerdotes con cura de almas procurasen que sus feligreses, y en especial los enfermos, hicieran cuanto antes "por escrito duplicado, la requerida declaración expresa de que desean

El obispo de Salamanca, Dr. Francisco FRUTOS VALIENTE, en su circular de 1 de marzo de 1932, aparte de disponer que en todas las parroquias debería establecerse inmediatamente un archivo secreto donde se custodiaran las declaraciones de los fieles que por escrito pidieran enterramiento sagrado, encarecía que tal declaración la hicieran inmediatamente los mayores de veinte años, añadiendo que "también deberán hacerla los que sin tener los veinte años y deseando enterramiento católico teman por alguna circunstancia que, si mueren, no se preocuparan mucho por esa clase de enterramiento salvo las personas que deben preocuparse."⁽²⁶²⁾

Más contundente en lo que atañe a la actuación de los parrocos cerca de sus feligreses, era la circular del obispo de Oviedo, Dr. Juan Bautista LUIS Y PEREZ, que "a fin de prevenir hechos que serían en extremo lamentables con motivo de la vigente legislación civil en materia de enterramientos", recomendaba a los sacerdotes que, con ocasión del cumplimiento pascual, procuraran obtener "de cada uno de sus feligreses una declaración firmada por el interesado y dos testigos en forma de lista general o como estimen más oportuno", en la que constara la voluntad de desear tener entierro religioso. Tal declaración se custodiaría en el archivo parroquial, con independencia de la conveniencia de que cada uno de los fieles conservaran otra en su domicilio y aun llevaran otra encima por si fallecían fuera de su parroquia. Los sacerdotes debían, proceder en igual forma."⁽²⁶³⁾

que su enterramiento se haga con todas las ceremonias y ritos de la Iglesia católica, entregando uno al sacerdote y quedando el con otro." (BOE de Astorga, año 80, 15 de marzo de 1932, núm. 6, pág. 99).

- (262) 1 de marzo de 1932, "Circular del Prelado.- Sobre la Ley secularizadora de Cementerios", BOE de Salamanca, año 79, 1 de marzo de 1932, núm. 3, pág. 62-66.
- (263) s.f. "Circular núm. 7", BOE de Oviedo, año 68, 1 de marzo de 1932, núm. 5, pág. 67.

La circular del Dr. Enrique PLA Y DENIEL, obispo de Avila, de 5 de marzo de 1932 insistia especialmente en la declaracion que debian hacer, aparte del resto de los fieles, los sacerdotes y religiosas.⁽²⁶⁴⁾

Análisis mas completo ofrecian las "Breves anotaciones a la ley de secularizaciende cementerios" publicadas por el boletin eclesiástico de Tarragona, toda vez que, indicando que al no señalar la ley la forma en que deberia efectuarse la declaracion sobre el enterramiento, sino unicamente que esta deberia serlo de manera "expresa",⁽²⁶⁵⁾ puntualizaba como medios idóneos de prueba los que señalaban tanto el artículo 1215 del Código civil como el 578 de la ley de Enjuiciamiento civil,⁽²⁶⁶⁾ advirtiendo de la posible ineficacia de efectuarla tan solo en el testamento:

"Atiéndase que en nuestro caso no se trata de un juicio, sino tan solo de acreditar de manera clara la voluntad de sepelio religioso. Entendemos que es bien manifiesta, expresa y terminante esta voluntad en todas aquellas personas que fallecen, recibidos los santos sacramentos o auxilios espirituales, y que puede presumirse en los bautizados y mas si eran catolicos practicantes. No obstante lo cual, y a fin de evitar inconvenientes que a nada práctico conducirian, y ante las facilidades que permite la misma ley al no concretar la manera de manifestacion de voluntad, es de aconsejar que cuando menos se haga

(264) 5 de marzo de 1932, BOE de Avila, año 43, 11 de marzo de 1932, num. 3, págs. 97-102. Este mismo boletin incluia en sus "Cuestiones pastorales ante las nuevas leyes civiles", tras referirse a otros temas, las "observaciones" generales a la ley de cementerios publicadas por el boletin eclesiástico de Toledo de 16 de febrero, así como los "casos prácticos" que en este figuraban, *Ibid*, págs. 156-161.

(265) En bastardilla en el original.

(266) El artículo 1215 del Código civil señalaba que las pruebas podian hacerse por instrumentos (documentos públicos y privados), por confesión, por testigos y por presunciones, mientras que el artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento civil establecia que los medios de prueba de que se podria hacer uso en juicio eran: 1º confesión en juicio; 2º documentos públicos y solemnes; 3º documentos privados y correspondencia...; 5º dictámen de peritos... 7º testigos.

ante dos testigos si no hubiese oportunidad o tiempo de consignar la manifestación por escrito. En este escrito, si el manifestante no supiere o no pudiese firmar, será necesario que lo suscriban dos testigos, y bueno será que éstos figuren también en toda manifestación de voluntad.

«Para mayor garantía, podrían los que la prefiriesen hacer legalizar sus firmas. No hay que decir que todavía es de más eficacia la manifestación ante Notario público, a cuyo medio podrán acogerse aquellos que deseen expresar su voluntad en documento notarial, por más que, siguiendo la tan laudable y cristiana costumbre de nuestros antepasados, la hubiesen hecho constar en su testamento, pues el testamento no podrá abrirse hasta pasados algunos días de la defunción, mientras por certificado del Registro de últimas voluntades no se acredite cual era el últimamente otorgado.»

Insistía también en la necesidad de que los menores de veinte años manifestaran igualmente su voluntad en todos los casos.

"La manifestación expresa de voluntad de enterramiento religioso es conveniente la hagan también los menores de veinte años. Al hacerla, aseguran que será respetada. De otra suerte, el carácter de su enterramiento, según el párrafo de del artículo 49, dependerá de la interpretación que de su voluntad vendrían obligados a hacer sus familiares."

Hechas estas recomendaciones acababa anunciando la edición de unas hojas para hacer la manifestación de voluntad, que habrían de firmar los interesados y dos testigos por duplicado: una para el interesado y otra para el archivo parroquial, donde se llevaría el oportuno registro. (267)

(267) s.f. "Breves anotaciones a la ley de secularización de cementerios", BOE de Tarragona, año 42, 5 de marzo de 1932, núm. 31, págs. 579-581, también en *Església i Estat durant la segona...*, II, págs. 583-587.

La "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", de 8 de marzo de 1932, publicada por el boletín diocesano de Barcelona, previamente a dar normas prácticas para la manifestación de voluntad sobre el carácter sagrado del enterramiento, enjuiciaba el contenido del artículo cuarto de la ley, para lo cual copiaba literalmente los dos primeros párrafos que en este epígrafe hemos transcrito de la "Instrucción pastoral" del obispo de Tui de 24 de febrero de 1932.

El comentario que el obispado catalán realizaba también contenía algunos párrafos textuales de las "Observaciones" a la ley de cementerios publicadas por el boletín eclesiástico de Toledo, aunque sin remitirse ni aludir a él, y que, en el contexto de la "Instrucción" dada por la diócesis de Barcelona, resultaban de menor dureza. Los transcribimos como forma de destacar las variaciones introducidas:

"¿Que mas declaración puede pedirse que el haber recibido el bautismo por el cual se ingresa en la Iglesia, sobre todo si esa primera "declaración" va ratificada por una vida de prácticas católicas y por una muerte cristiana?"

"¿Que el bautismo suele recibirse cuando aun no se tiene uso de razón? Pues cuando menos procedía considerarlo como expresión de la voluntad de los padres, que debe respetarse mientras no sea expresamente rectificada. No cabe, pues, suponer en los que mueran sin hacer declaración expresa de su voluntad el deseo de ser enterrados sin los ritos católicos, sino al contrario."

Tras estos párrafos pasaba a dar las indicaciones sobre la forma de realizar la declaración de voluntad y seguidamente exhortaba a las familias a cuidar el entierro católico de sus fallecidos menores de veinte años, en el lógico supuesto de que no hubieran efectuado tal declaración.

"... todas las familias cristianas con espíritu de obediencia a las leyes de la Santa Iglesia y con espíritu de caridad y de respeto a los derechos católicos de sus familiares fallecidos antes de cumplir los veinte años, deben procurar que su enterramiento tenga carácter católico y resistir con fortaleza cristiana contra este oleaje horrendo de laicismo, que quiere arrancar a Cristo de toda la vida nacional, familiar e individual española."

A mayor abundamiento, transcribía después la serie de "casos particulares" relacionados con la ley de cementerios que, como aquí si se señalaba, eran copiados del boletín eclesiástico de Toledo. El último de los casos reseñados se refería, precisamente, a la declaración de los menores de veinte años, sobre la que, quizá por esa necesidad de "fortaleza cristiana" que, según el redactor, en lo que parece un desmesurado planteamiento, precisaban las familias para cumplir con los mandatos eclesiásticos, aconsejaba que también la efectuaran.⁽²⁶⁹⁾

Las "Acotaciones" a la ley de cementerios publicadas en el boletín eclesiástico de León, seguran, sin aludir a ellas, las instrucciones publicadas por el de Tarragona, si bien el redactor introduciría determinadas variaciones a las mismas, entre las que destacan el juicio que incluía sobre la nueva disposición al señalar que "Es sectariamente laico el contenido del artículo cuarto de la Ley, que reproducimos para que no se pierda de vista", y, fundamentalmente, la amplia competencia que daba a los sacerdotes al indicar que cuando asistieran a los enfermos debían preguntarles sobre su voluntad de entierro religioso, forma idónea para que, si se efectuaba ante testigos, pudiera asegurarse la existencia y efectividad de la declaración.

(269) 8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos" BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120. Reproducido por el de Mallorca, año 72, 31 de marzo de 1932, núm. 8, págs. 172-284.

"... siempre que asistan a un enfermo y despues de administrado el Santo Viatico y hecha la pregunta, segun el Manual Toledano, de si desea la Extremauncion para cuando llegue el caso, anadir esta otra: "¿Y es tambien vuestra voluntad, si el Señor dispusiera llevaros de esta vida, ser enterrado en lugar sagrado y con todas las preces y ritos de la Iglesia Catolica y que sobre vuestra sepultura se coloque la Santa Cruz? La cual, contestada afirmativamente ante las personas presentes estimamos tenga caracter religioso."

Esta formula tambien seria recogida en la pastoral del obispo de Calahorra, Dr. Fidel GARCIA MARTINEZ, de 17 de marzo, como despues veremos, por lo que, dada la transcripcion literal de la misma y de todo el parraro en que viene incluida, es lógico pensar que los redactores de estas "Anotaciones" se inspiraran no solo en el boletin eclesiastico de Tarragona sino tambien en el de esta diocesis.

Concluya el documento señalando, no obstante lo indicado, la conveniencia de que, para mayor seguridad, todos los fieles, aun los sacerdotes y religiosos, hicieran la declaracion de voluntad de enterramiento sagrado por escrito, asi como la de que tambien los menores de veinte años hicieran tal declaracion expresa de voluntad.***

Contrariamente no insistiria en este ultimo punto el obispo de Segovia, Dr. Luciano PEREZ PLATERO, en la comunicacion que publicaba el boletin diocesano de 13 de marzo de 1932, y en la que señalaba que los parrocos cuidarian de advertir "opportune et importune" a los fieles la necesidad imprescindible de hacer la declaracion; que los arciprestes se encargarian de que la tuvieran hecha todos los sacerdotes de su arciprestazgo y que los superiores y superiores de casas religiosas debieran recoger inmediata-

(259) 31 de marzo de 1932, "Anotaciones a la Ley de cementerios", BOE de León, 31 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 112-118

mente las de todos sus subordinados. Mas al referirse al sepelio religioso de los menores de veinte años, simplemente insiste en el derecho y deber de las familias de efectuarlo:

"Las familias catolicas tienen perfecto derecho legal a exigir que el enterramiento de los incapacitados o menores de veinte años sea religioso; pero tambien tienen estricto deber sagrado de hacerlo asi, para no arrebatat con escandalo a la Iglesia la posesion y el honor de sus hijos, ni a estos la solicitud y el amparo de la Iglesia."

Es en esta comunicacion, por otra parte, en la unica que hemos encontrado una referencia al posible caso de un catolico que, fallecido en el seno de la Iglesia, hubiera sido, sin embargo, sepultado civilmente. la solucion dada por el obispo remitia a la correspondiente inclusion en el registro parroquial haciendo caso omiso de la forma de enterramiento.

"Ea. A los efectos del registro parroquial no importa que algun catolico, fallecido cristianamente, haya sido enterrado civilmente -sin ceremonias religiosas- por descuido en hacer la declaracion o por otra causa cualquiera. En los libros de defuncion los Parrocos extenderan la partida de todos los que mueren en el seno de la religion y en la comunión de la Iglesia, consignando en su caso la causa de no haber recibido sepelio canonico o religioso." (270)

Esta norma, que tendia a contemplar uno de los aspectos que pudieran producirse y que procuraba salvar la posibilidad de la falta de constancia del fallecimiento cristiano de un fiel, que, por cualquier motivo, hubiera sido enterrado civilmente, adolecia de escaso desarrollo, lo cual podia dar lugar a equivocas consecuencias. El "descuido

(270) 15 [sic] de marzo de 1932, "Sobre la svcularización de cementerios", BOE de Segovia, año 77, 13 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 109-115.

en hacer la declaración", que automáticamente era causa, según la ley, de que se efectuara el sepelio civil. ¿no podía dar lugar a una interpretación muy amplia por parte de familias y parrocos? Para entender que el fallecido había muerto en el seno de la Iglesia ¿era necesario que hubiera recibido la oportuna asistencia religiosa en sus últimos momentos o había aludir a un arrepentimiento final del que podían ser testigos tan solo sus familiares? Esta falta de especificación podía dar lugar tanto a una posible vulneración de la voluntad del difunto por parte de su familia, como a la inevitable consecuencia de un registro parroquial no acorde con la realidad. Obviamente, la prueba rotunda de la muerte en el seno de la Iglesia sería la recepción, voluntaria y consciente, de los últimos sacramentos, pero, de no darse estos requisitos, cabía siempre la interpretación. Por otro lado ¿qué otras causas podían determinar el entierro civil existiendo declaración expresa en contrario? ¿la imposición forzosa por los familiares o autoridades? Era positivo este intento de examinar las diversas situaciones que pudieran producirse en la aplicación de este artículo de la ley, pero para que la solución dada hubiera respondido en todo caso a la realidad, hubiera sido preciso explicitarla en la forma más detallada posible, pues, de esta manera, y salvo el claro caso antes apuntado, era cuestión que quedaba reservada al juicio de los parrocos.

Para evitar esta problemática -que no iba en contra de la ley, pues si bien la pretensión del legislador era respetar la voluntad del difunto, tenía que limitarse a regular la existencia o no del entierro civil, sin poder entrar en la de los archivos y registros parroquiales- el resto de los obispos no aludieron a estas hipótesis, centrando sus instrucciones en la perentoria e inexcusable necesidad de que todos los católicos hicieran la declaración

expresa de voluntad de ser enterrados segun la liturgia de la Iglesia.

Así, el obispo de Orihuela, Dr. Francisco Javier IRASTORZA LOINAZ, en su circular de 15 de marzo de 1932 insistía en tal necesidad, si bien lo haría por el comodo procedimiento de copiar, casi literalmente, la circular del vicario capitular de Toledo, Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO, de 16 de febrero de 1932, de la que unicamente suprimiria sus párrafos cuarto a séptimo, es decir, aquellos en que se criticaba la nueva disposicion o se hacia referencia al abuso de poder de alguna autoridad municipal de esa archidiócesis.⁽²⁷¹⁾

El obispo de Madrid-Alcalá, Dr. Leopoldo Eijo GARAY, no haria comentario alguno sobre la ley, limitándose a publicar, a través de su penitenciario-secretario, la serie de disposiciones sobre la forma de efectuar las declaraciones, creacion del archivo parroquial para la custodia del ejemplar correspondiente, realizacion y entrega de la declaracion a sus superiores por sacerdotes, religiosos y religiosas, y al sacerdote o persona de su confianza en el caso de rielees que vivieran en establecimientos benéficos o centros analogos; siendo la unica nota a destacar de estas conocidas disposiciones la exhortacion que hacia a que la declaracion sobre voluntad de enterramiento la hicieran todos los catolicos que hubieran cumplido la edad para testar de catorce años.⁽²⁷²⁾

Este mismo limite de edad fijaba el obispo de Calahorra Dr. Fidel GARCÍA MARTINEZ en la "Instruccion Pastoral" de 17 de marzo a la que ya hemos aludido. Al tra-

(271) 15 de marzo de 1932, "Circular núm. III.- Sobre cementerios y enterramientos", BOE de Orihuela, año 51, 15 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 119-123.

(272) 15 de marzo de 1932, "Disposiciones sobre la ley de cementerios", BOE de Madrid-Alcalá, año 47, 15 de marzo de 1932, núm. 1555, págs. 112-114.

tar en ella de este artículo recomendaba igualmente que efectuaran la declaración los sacerdotes y religiosos e incluía, como hemos señalado al comentar las "Anotaciones" a la ley publicadas por el boletín eclesiástico de León, la recomendación a los sacerdotes de que al asistir a un enfermo preguntaran a este sobre su voluntad de ser enterrado según el ritual de la Iglesia católica. Junto a estas instrucciones lo más destacable a nuestros efectos es el juicio que hacía sobre el artículo cuarto que comentamos, al que calificaba como "abierta manifestación del espíritu sectariamente laico."²⁷³

Como hemos visto, el obispo de Tenerife, Dr. Albino GONZÁLEZ MENÉNDEZ-REIGADA, hacía suya, con fecha 31 de marzo, la "Instrucción dictada por el cardenal ILUNDAIN el día 6. En su escrito, el arzobispo de Sevilla, tras indicar que "ninguna necesidad debiera tener de hacer esa declaración (la de voluntad de tener enterramiento católico) quien muere en el seno de la Iglesia, porque es derecho suyo imprescriptible e inalienable el de ser sepultado en lugar sagrado y con rito religioso litúrgico", había destacado la urgente necesidad que tenían los fieles de precaverse, dado el texto de la ley, para lo cual daba las pertinentes instrucciones a fin de que todos, "aun las religiosas de clausura", si tenían ya veinte años, hicieran "la declaración escrita que la Ley exige."

Notese como en esta "Instrucción" el cardenal no planteaba la disyuntiva que hemos visto recogida por otros miembros del episcopado respecto a la posibilidad de simple declaración verbal, entendiendo que la declaración expresa a que la ley se refería tenía que ser necesariamente escrita y llegando, por tanto, más allá de la exigencia del mismo tex-

(273) 17 de marzo de 1932, "Instrucción Pastoral sobre cementerios y enterramientos", BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 22 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 49-58.

to legal. Por otra parte, la recomendación de efectuar tal declaración la hacía únicamente a los mayores de veinte años, encargando a las familias católicas de aquellos que fallecieran sin tener tal edad que "no consientan que nadie coarte su derecho de exigir enterramiento religioso para sus familiares muertos antes de los veinte años." Con ello, y a diferencia de otros hermanos suyos en el episcopado, u otros redactores de instrucciones por ellos encargadas, situaba la posibilidad de falta de enterramiento religioso de los menores no en la voluntad contraria de la familia -de ahí el no señalar la conveniencia de la declaración en estos casos- sino en la posible intromisión antijurídica de algunas autoridades civiles.⁽²⁷⁴⁾

El Sr. GUMA, tras explicitar el derecho de los difuntos a expresar en vida la clase de sepultura que deseaban y, a falta de esta manifestación, la prerrogativa de la Iglesia a establecer cual debía ser esta, según ya hemos visto anteriormente, al dar la serie de "Normas prácticas" que incluía en su "Instrucción pastoral" de 20 de marzo de 1932, dedicaba un concreto apartado a la declaración de enterramiento católico, en el que criticaba duramente el contenido del artículo cuarto de la ley.

"El artículo es un ataque a fondo contra los derechos de los fieles y de la Iglesia y tiende a universalizar la secularización de la sepultura. En un país como España, donde el sepelio laico ha sido hasta ahora cosa totalmente excepcional y rarísima, lo obvio era requerir la voluntad expresa sobre la forma de sepultura a aquellos que no la hubiesen querido religiosa. Es una demostración más de que los que vivimos en régimen de excepción somos los católicos."

(274) 6 de marzo de 1932, "Instrucción acerca de cementerios y enterramientos de los fieles", BDE de Sevilla, año 75, 7 de marzo del 1932, núm. 1201, págs. 92-97. Reproducida en el BDE de Tenerife, 1932, marzo y abril, núm. 3 y 4, págs. 37-44.

Y, analizando el mandato legislativo, pasaba a exponer la forma en que podía realizarse la declaración de voluntad que, a partir de entonces, se exigía, para, a la luz de sus conocimientos jurídicos, interpretarla en la forma mas laxa posible:

"Aun siendo vejatoria la disposición para quienes en su caracter de bautizados y fieles de la Iglesia católica llevan una exigencia de sepultura eclesiástica, podríamos decir que por la misma generalidad de la fórmula que usa el Decreto (sic) al exigir la declaración de voluntad "de manera expresa", es natural deducir que "cualquier manera expresa" de declarar la voluntad de ser sepultado en tierra sagrada debería bastar a los efectos de la ley. Porque: "Las palabras generales deben entenderse generalmente"; "Donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir"; "La locución indefinida equivale a universal", según los aforismos de derecho: e indefinida, general e indistinta es la locución "de manera expresa" usada en el Decreto (sic); luego comprende cualquier manera expresa de voluntad. Lo que se hace necesario es que conste esta expresión de la voluntad para que pueda surtir sus efectos jurídicos y sociales. Así, pues, en buena interpretación legal, no sería necesario hacer constar por escrito o con la firma y menos ante notario, en documento publico, en testamento, ante juez o en otra forma especial determinada y exclusiva, pues bastaría que constara la voluntad en cualquier forma de expresarla. La condición personal, la profesión, las practicas deliberadas y terminantemente expresivas de esta voluntad debieran bastar para expresar la voluntad, que en todas estas formas queda perfectamente definida. Lo contrario, como desgraciadamente hemos visto en algunos casos que la prensa ha hecho publicos, es proceder de manera irracional, abusiva y originadora de los mayores absurdos."

Esta interpretación, que tan contundente parecia, no servia, sin embargo, para incitar a los católicos a exigir la actuación de las autoridades conforme a ella. Una vez hecha quedaba, como ya hemos visto en otros miembros del episcopado, en meras palabras del "deber ser" para,

seguidamente, pasar a la norma cautelar y aconsejar a todos los fieles -sea cual fuere su estado e incluso a los menores de veinte años que hubieran alcanzado el uso de razón si no riaban de la actitud de su familia- que no dejaran de efectuar la declaración exigida por la nueva norma:

"Pero no es natural lo que suele ocurrir en momentos de agitación sectaria como los presentes, ni todas las autoridades subalternas -la experiencia es demasiado elocuente y viva- ofrecen garantías bastantes de que la ley se aplique según su sentido natural y obvio. Conviene, por lo mismo, estar prevenidos y tomar las precauciones oportunas para que no se viole derecho tan sagrado. A este fin recomendamos encarecidamente a todos nuestros diocesanos, sin excepción de profesión o estado, incluso a los menores de veinte años que hubiesen alcanzado uso de razón y no tuviesen absoluta confianza en sus domésticos en esta materia, que formulen por escrito su voluntad expresa de ser enterrados en tierra sagrada según el impreso que con este Boletín se reparte y en la forma en el mismo indicada." (275)

De gran laconismo eran las instrucciones dadas el 1 de abril de 1932 por el obispado de Vitoria sobre la declaración de enterramiento, limitándose su vicario general a indicar la conveniencia de que los sacerdotes hicieran saber a los fieles la necesidad, según el artículo cuarto de

(275) 30 de marzo de 1932, "El laicismo póstumo.- Instrucción Pastoral sobre cementerios y sepulturas", BDE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 704, págs. 207-239. El número del boletín eclesiástico de 30 de abril, refiriéndose, al impreso al que el obispo aludía y en base a que se habían hecho "peticiones de millares de fórmulas declaratorias" a la imprenta diocesana, informaba que se había dispuesto una numerosa tirada, por lo que los párrocos podían hacer los pedidos que desearan, exhortando, al tiempo, a que en las cofradías y asociaciones religiosas se secundara esta recomendación y todos los asociados hicieran la declaración. Para mayor claridad volvía a insertar la fórmula de la misma, aconsejando la firmaran también dos testigos, se incluyera como cláusula testamentaria y se hicieran dos ejemplares, uno para la parroquia y otro para la familia, e incluso un tercero para llevarlo consigo el interesado, sobre todo en los desplazamientos. (Ibid., "Sobre declaración de fe católica a los efectos de enterramiento religioso", BDE de Tarazona y Tudela, año 70, 30 de abril de 1932, núm. 706, págs. 302-303).

la ley, de hacer constar de manera expresa su deseo de tener enterramiento religioso y aludiendo a las formas de efectuarla, que eran las recogidas en todas las instrucciones que vamos comentando: testamento o escrito firmado por dos testigos, "del que será prudente que hagan al menos dos ejemplares, uno para la parroquia y otro para la familia."⁽²⁷⁶⁾

Y en el número siguiente del boletín eclesiástico incluiría en la "Sección de consultas" una serie de ellas "sobre cementerios y sepulturas", transcritas, según indicaba, del boletín eclesiástico de Canarias. En ellas se señalaba que la ley no exigía que la declaración fuera por escrito, bastando se hiciera de palabra, siempre que pudiera probarse; si bien era prudente fuera hecha por escrito y con las formalidades indicadas. A ello se añadía una crítica que, cuando menos, era novedosa, sobre el artículo cuarto de la ley:

"Mucho tino requiere la explicación de este extremo de la ley. Hasta a los no católicos se ha pretendido enterrar en repetidas ocasiones en lugar sagrado oponiéndose la Iglesia, en cumplimiento de su deber, y viniendo solo de ahí los conflictos, de ordinario, por lo que claro se ve cuán innecesario sea en este país exigir al católico, tal vez de comunión frecuente incluso, tamaña manifestación."

Concluía esta "Sección de consultas" señalando como la ley permitía expresamente que los menores de veinte años hicieran la declaración y que su voluntad debería ser respetada. Al no determinarse por la norma legal desde qué edad podía efectuarse, cabía fijarla en la de catorce años, edad a partir de la cual se podía testar.⁽²⁷⁷⁾

(276) BOE de Vitoria, año 68, 1 de abril de 1932, núm. 8, págs. 219-222. Reproducido por el BOE de Zaragoza, año 71, 2 de mayo de 1932, núm. 9, págs. 171-174.

(277) s.f., "Sección de consultas.- Sobre cementerios y sepulturas", BOE de Vitoria, año 68, 15 de abril de 1932, núm. 9, págs. 241-243.

Queda por aludir, para acabar, a las instrucciones contenidas en los boletines oficiales eclesiasticos de Valladolid y Santiago de Compostela.

Publicaba el primero en el mes de abril la ley sobre cementerios acompañando a ella, como aclaración a su artículo cuarto, una nota a pie de pagina en la que, tras declarar que "tratándose de los bautizados y muertos en el seno de la Santa Iglesia, era mas que natural dar por cierta su voluntad de que su enterramiento se verificara según las leyes de la misma Iglesia", se señalaba que, no obstante, el citado artículo exigia declaración expresa a los mayores de veinte años, insistiendo en que, al no especificar la ley la forma de la declaración, ésta podia ser oral ante testigos, pero recomendando se hiciera en el testamento o en una hoja firmada por el interesado y dos testigos, de la que se haria un ejemplar para la familia y otro para su custodia en la parroquia.⁽²⁷⁸⁾

El boletin eclesiastico de la diócesis de Santiago de Compostela en su "Aviso a los Encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales", incluía un breve párrafo sobre la declaración de voluntad de enterramiento, indicando que ésta deberia formularse por escrito y custodiarse en el archivo parroquial.⁽²⁷⁹⁾

(278) s.f. "Disposiciones civiles.- a) sobre enterramientos, b) sobre el ejercicio público del culto", BOE de Valladolid, año 57, 15 de abril de 1932, núm. 3, págs. 41-42.

(279) s.f. "Avisos.- A los Encargados de parroquias sobre los cementerios parroquiales", BOE de Santiago de Compostela, año 61, 16 de abril de 1932, núm. 2672, págs. 76-77.

Fácilmente se desprende de todos los comentarios e instrucciones hasta aquí recogidos que las normas dadas a parrocos y fieles, si bien no encerraban una gran disparidad, adolecían, no obstante, de una visión unívoca, lo que derivaba en distintos consejos para las mismas cuestiones. Tal ocurría, por ejemplo, con la declaración de los menores de veinte años, encargada expresamente en algunas diócesis mientras que en otras se dejaba al arbitrio de la familia, preveyéndola contra posibles intrusiones del poder civil, declaración que, por otra parte, en unos casos era aconsejado se hiciera a partir de la edad de catorce años o de testar y en otros, como hemos visto recomendado por el Dr. GOMA, mas exageradamente, a partir del simple uso de razón si no se tenían garantías de la actitud de los familiares. También ocurría con la forma de efectuar la declaración, señalándose en la mayoría de los casos que esta podía ser oral (aunque aconsejándose la forma escrita); significándose en algunos otros que debía ser necesariamente por escrito, sin mas comentarios; instándose en otros a hacerlo constar expresamente en el testamento y advirtiéndose, por último, en una sola ocasión, de los peligros de efectuar la declaración unicamente por esta vía, dada la tardanza con que se abrían estos documentos, siempre con posterioridad al sepelio del testador.

Hay que señalar, sin embargo, que estas disparidades en la interpretación de la ley y el consiguiente consejo a los fieles, no se daban tan solo a nivel de los miembros de la Iglesia, pues al no especificar la norma legal claramente la manera de efectuar la declaración, limitándose a establecer que se hiciera "de manera expresa", dejaba abierto el camino a diversos pareceres respecto a la forma de efectuarla y es lógico suponer que, previamente a dictar sus normas, los distintos miembros de la jerarquía se asesoraran debidamente.

Fundamenta esta suposición la carta, ya aludida, enviada por el obispo de Tortosa, Dr. Felix BILBAO, al cardenal VIDAL el 22 de febrero de 1932; al hablar en ella de la cuestión de la declaración de voluntad de enterramiento, y tras señalar que la ley "plantea cuestiones múltiples por el cerrilismo de muchos alcaides sobre la manera de probar la voluntad del difunto en cuanto a querer enterramiento religioso", decía:

"El último punto es el del art. 4. puesto con toda la mala intención para favorecer los enterramientos civiles, exigiendo para el entierro religioso disposición expresa del interesado, pasando de los 20 años de edad. Sobre la manera de que conste esa disposición expresa, el Sr. fiscal de la Audiencia de Castellón asegura que no necesita que conste por escrito; que basta con que sea hablada y que haya dos testigos que puedan acreditarlo. Para asegurarlo más, otros propugnan la conveniencia de que conste por escrito firmado por el interesado. Algun Sr. Notario de esta se ofrece también a garantizar la firma de quienes lo desean, gratuitamente."

6.1. El reglamento de 8 de abril de 1933. Obispos y arzobispos de Palencia, Toledo, Burgos, León, Segovia, Oribuela, Lugo y Mondoñedo, Tarazona (administración apostólica de Tudela), Iruy, Vitoria, Zaragoza, Zamora y Sevilla.

De todas formas, no cabe duda que el reglamento de la ley de cementerios vino a hacer lo que la jerarquía no había logrado, esto es, a unificar criterios, quizá como consecuencia de las diversas opiniones vertidas, tanto a nivel civil como eclesiástico, sobre las posibles alternativas a la hora de efectuar la declaración de voluntad. Así, la nueva disposición pasaba a regular minuciosamente las distintas formas que podía revestir, haciendo tan solo una excepción en cuanto a la necesidad de formularla. excepción, que, precisamente, vania a disipar una de las mas negras conjeturas esbozadas por el episcopado, la de "los sacerdotes, ministros y religiosos profesos de los distintos cultos", los cuales podian ser enterrados con arreglo a los ritos de sus respectivas religiones, "si no hubieran dispuesto lo contrario". Con ello se cubria una laguna legal que habia dado lugar, como hemos visto, a que por numerosos prelados se encareciera al clero y religiosos de sus diócesis la realización de la declaración.⁽²⁸¹⁾

(281) Sobre la declaración de voluntad de enterramiento ver en el apéndice núm. 2 el capítulo IV del reglamento, "Del carácter de los enterramientos", que incluye los artículos 26 a 45.

Las distintas formas reguladas por el reglamento suponían una total contradicción con el propósito que AZANA había expresado al Cardenal VÍBAL en su ya citada carta de 24 de marzo de 1932 y en la que le indicaba que se procurarían adoptar los medios para manifestar la voluntad de recibir sepultura eclesiástica que menos violentaran las costumbres.***

Es evidente que tal propósito era totalmente desvirtuado por las disposiciones reglamentarias, lo cual no deja de ser destacable teniendo en cuenta que el reglamento, como tal, era una norma dictada por el poder ejecutivo, al margen de las Cortes, y del que AZANA era la cabeza. De esta forma la nueva norma venía a cerrar la puerta a la diversidad de declaraciones que, con tal que fueran "expresas", la ley posibilitaba y, aunque dejaba fuera la obligación de realizarse por parte de sacerdotes y religiosos (posibilidad contra la que la jerarquía, por otra parte, no había protestado demasiado, prefiriendo en muchos casos aconsejar que se efectuara la declaración, sin más comentarios) entendiendo que el hacerla necesaria también en estos casos rayaba en la paradoja, no dejaba de prever la posibilidad de que también por parte de estos se pudiera disponer el no ser enterrados según el ritual de la religión que profesaban, lo cual, si bien cerraba el abanico de hipótesis a manejar para estos casos, no deja de parecer igualmente paradójico.

Analizando comparativamente las normas dictadas por la jerarquía y las emanadas del poder ejecutivo, una cuestión parece quedar clara y es la falta de fe del episcopado en la buena voluntad de las autoridades civiles y la misma falta de fe del gobierno en la actuación del clero

católico y de la "familia tradicional española". La jerarquía aclaraba en sus instrucciones todas las dudas e informaba sobre todas las posibilidades, de manera que no quedara resquicio abierto para una posible inferencia de las autoridades municipales (que la declaración la efectuaran los sacerdotes y religiosos y los menores de veinte años: que podía ser oral, pero que era preferible escrita; que se facilitaban hojas impresas, etc. etc.) salvaguardando así el derecho de todo católico a ser enterrado según el ritual de la fe profesada. El gobierno, por su parte, contemplaba todas las posibilidades tendentes a garantizar la no tergiversación de la voluntad de cualquier súbdito del Estado que quisiera esgrimir su derecho a ser enterrado al margen de un ritual que, en casos, dependía más de una cuestión social en la que quedaba involucrada la familia que de sus propias y personales convicciones.

Ejemplo de tal actitud gubernamental eran las disposiciones reglamentarias que establecían que las declaraciones debían ser manuscritas de puño y letra del propio interesado, con lo que se tendía a evitar cualquier posible falsificación de las hojas impresas que habían circulado, quedando estas, además, automáticamente invalidadas: las que prohibían ser testigos a los parientes dentro del tercer grado en las declaraciones de aquellos que no supieran escribir y el hecho de que, contrariamente a la especificación que acabamos de recoger, el no concretar, en el caso de fallecimiento de menores o incapaces que no hubieran efectuado la declaración expresa, los familiares a que aludía la ley, dando validez a la opinión de cualquier familiar, fuese del grado que fuese, de forma que si no hubiera común acuerdo entre estos, cualquiera de ellos podría pedir la intervención del juez municipal del lugar en el que el fallecimiento hubiera ocurrido -fuera este el lugar de residencia habitual del difunto o no-. Así sería el juez el que, en definitiva y a la vista de las

alegaciones de todos -incluso de los parientes que residieran en la localidad tan solo de forma accidental-resolveria. Por ultimo, tambien se establecia la intervencion del juez municipal para todos los casos de duda respecto a la existencia, validez o interpretacion de las manifestaciones de voluntad, dejando, por tanto, al arbitrio de esta autoridad civil la decision sobre el caracter del enterramiento, una vez hubiera oido no solo a los familiares del difunto, sino tambien a cualquier otra persona que pudiera conocer su voluntad o estuviera en posesion de datos que permitieran conocerla. Estas decisiones judiciales eran, ademas, inapelables y de resolucion inmediata.

Como facilmente se desprende del contenido de estas normas, su finalidad ultima era la de salvaguardar al maximo la voluntad real del difunto, aunque no dejaba de ser insolito el que el reglamento permitiera la intervencion de cualquier pariente de aquel en los casos de minoria de edad, incapacidad o duda y que, por la intervencion incluso de alguien lejano en parentesco que se opusiera a la decision de los propios padres del fallecido, ya fuera necesaria la intervencion de la autoridad judicial.

Cierto es que podia arguirse que tal intervencion podria ser tanto en contra como a favor del enterramiento catolico, pero no hay que olvidar que la practica era, precisamente, que este se efectuara segun este ritual y que cualquier familia tradicional tendria que ver con disgusto la injerencia de la autoridad civil en cuestion tan intima para ella, por lo que preciso es concluir que esta regulacion reglamentaria era poco acorde con la realidad española.

Por otra parte el reglamento seguia la norma general establecida por la ley de que, a falta de declaracion en contra, el entierro seria civil, cosa que, indicaba,

sucedería igualmente en el caso de que existieran varias declaraciones contradictorias carentes de fecha, caso en el que, en consecuencia, invalidaba cualquier declaración de parientes o allegados y condicionaba cualquier intervención judicial, prevista, como hemos apuntado, en caso de duda.

En cuanto a las formas de efectuar la declaración, aparte de rechazar la de tipo verbal y toda aquella que no fuera manuscrita -bien por el declarante o por un tercero con la intervención de los testigos que especificaba- introducía la novedad de la existencia de un registro especial en cada juzgado municipal, que regulaba minuciosamente, señalando que el hecho de haber obtenido una inscripción en el no privaba al interesado del derecho a solicitar nuevas inscripciones en el mismo o en otros juzgados municipales, prevaleciendo siempre -al igual que establecía para el caso de la existencia de varias declaraciones debidamente fechadas ajenas a este registro- la de fecha más reciente. Este registro sería secreto -aun al propio interesado tan solo se le entregaba una papeleta en la que se hacía constar el hecho de la inscripción, pero no el contenido de la misma- y tan solo se expediría certificación de sus asientos en el caso de que a la solicitud de la misma se acompañara el certificado de la partida de defunción de la persona a que el asiento se refiriera. (283)

El haber transcurrido más de un año entre la promulgación de la ley y la del reglamento fue causa de que durante todo ese tiempo los fieles siguieran las instruccio-

(283) Ver el apéndice núm. 2.

nes dadas por la jerarquía. Al ser estas mucho más laxas que las que la nueva norma venía a establecer, los miembros del episcopado tuvieron que apresurarse a dar nuevas orientaciones a sus respectivos diócesanos.

Estas instrucciones incluían, en algunos casos, la protesta por el rigor de la regulación reglamentaria, más estricta que la de la ley, pero, sin embargo, no iban acompañadas de un minucioso análisis del articulado y de sus consecuencias, como habría cabido esperar y, en ocasiones, los obispos se limitaron a orientar a sus párrocos y fieles ante la nueva disposición, quizá por considerar que ya había quedado suficientemente clara la postura de la Iglesia con las manifestaciones efectuadas ante la aparición de la ley de 30 de enero de 1932.

Esto último haría, por ejemplo, el Dr. Agustín PARRADO GARCÍA, obispo de Palencia, que, en lo relativo a la cuestión de la declaración de enterramiento, se limitó a publicar en el boletín de su diócesis un extracto del contenido de los artículos 26 a 45 del reglamento por medio de la circular de la vicaría general del obispado de 25 de abril de 1933, que no incluía comentario alguno sobre este punto.⁽²⁸⁴⁾

Opuesto a este caso sería el del vicario capitular de Toledo, Dr. Feliciano ROCHA PIZARRO, que en sus "Instrucciones" de 1 de mayo de 1933 incluía tanto su protesta por la regulación que introducía el reglamento como sus consejos ante cada forma de declaración que este

(284) 25 de abril de 1933, "Vicaría General del Obispado.- Circular", BOE de Palencia, año 83, 29 de abril de 1933, núm. 9, págs. 226-229.

establecía. Estas "Instrucciones" son las mas completas que hemos encontrado publicadas por la jerarquia y seguramente por ello, como ya nota sucedido al aparecer la ley, fueron reproducidas en otras diocesis o sirvieron de pauta para las dadas en ellas, razon por la que, como hemos hecho en aquel caso, pasamos a reproducirlas integramente en el apéndice correspondiente.

No queremos, sin embargo, dejar de señalar aqui que el vicario destacaba en su escrito, desde su mismo inicio, que el nuevo reglamento agravaba considerablemente las disposiciones contenidas en la ley, tanto desde el punto de vista de los derechos de la Iglesia como del de los fieles, al establecer para estos unos medios de efectuar las declaraciones de voluntad de enterramiento con los que se queria venir a anular las ya hechas y a introducir dificultades en una cuestion en la que convenia dar las mayores facilidades.

Por ello, y al objeto de lograr la debida uniformidad, pasaba a dictar unas normas por las que, tras comentar las distintas disposiciones del reglamento, advertía, en cuanto a la declaracion de enterramiento y pese a lo establecido en el, que los sacerdotes y religiosos hicieran expresa declaracion de voluntad, como así correspondia hacer tambien a todos los fieles mayores de veinte años por medio de:

a) haciéndolo constar en el registro de cada juzgado municipal mediante su comparecencia o la de persona con poder bastante para representarlos; alternativa esta que pasaba a criticar, señalando, entre otros extremos, que "cuando uno fallezca fuera del lugar donde hizo su declaracion, no solo se originaran molestias y gastos, sino que en muchos casos será imposible tener a tiempo el certificado de la declaracion";

b) naciendo la declaración en el testamento. Sobre ello puntualizaba que, al ser muchos los que no hacían testamento, los sacerdotes debían aconsejar el empleo de los otros medios, que eran:

c) escritura pública, que consideraba un medio extraordinario;

d) redactando el interesado la declaración de su puño y letra, y

e) redactándola un tercero, debidamente firmada por el interesado y por el juez o el alcalde del lugar donde se realizara o, en su defecto, por dos testigos mayores de edad, siempre que no fueran parientes del declarante dentro del tercer grado, o por tres si este no supiera escribir.

Impartidas estas instrucciones en base a las nuevas disposiciones reglamentarias, el Dr. KOCHA FIZARRO no dejaba de advertir a sus fieles, tal como la jerarquía había venido haciendo desde las primeras normas dictadas por el mismo, sobre la conveniencia de que, en casos, se adoptara la precaución de entregar un duplicado de la declaración al párroco, que debería archivarlo en lugar seguro.

Por último, respecto a los menores de veinte años, el vicario general indicaba que había de ser la discreción de parrocos y confesores la que resolviera si habían de aconsejar a estos que hicieran la declaración.***

(285) 1 de mayo de 1933, "Instrucciones del Excmo. Sr. Vicario Capitular sobre incautación de cementerios y declaración de voluntad de entierro católico", BUE de Toledo, año 89, 2 de mayo de 1933, núm. 6, págs. 98-103. Reproducido, entre otros, por los Boletines eclesásticos de Málaga (año 66, mayo de 1933, núm. 7, págs. 134-140); Vich (año 79, 30 de junio de 1933, núm. 2124, págs. 319-3321); Tortosa (año 75, 15 de mayo de 1933, núm. 9, págs. 76-79); Coria (año 68, 1 de junio de 1933, núm. 11, págs. 83-85) o Gerona (año 77, 29 de mayo de 1933, núm. 5, págs. 171-173). Ver el apéndice núm. 12.

A diferencia del vicario general de Toledo, el Dr. Manuel DE CASTRO ALONSO, arzobispo de Burgos, se referiría a la cuestión que tratamos con extremo laconismo, limitándose a incluir en su escrito sobre "Incautación de cementerios parroquiales" de 6 de mayo de 1933, un párrafo llamando la atención sobre los distintos medios que establecía el reglamento para poder hacer la declaración, advirtiéndole que "una vez cumplidos los requisitos que el Reglamento señala y manifestada la voluntad por cualquiera de los medios que indica, la Autoridad local no puede impedir el entierro católico." ...

El mismo laconismo encerraba el escrito de la vicaría general del obispado de León, que, en su "Instrucción sobre cementerios parroquiales", encarecía simplemente a los sacerdotes que leyeran atentamente el capítulo del reglamento relativo a la declaración de enterramiento, a fin de que, en la forma en que lo consideraran oportuno, dieran a conocer las nuevas disposiciones a a los fieles, "en especial sobre declaración manuscrita de la voluntad... y que con tal disposición quedan anuladas todas las declaraciones que no se ajusten a los preceptos del citado reglamento." ...

La circular de la secretaría de cámara y gobierno del obispado de Segovia publicada a finales de mayo, recogía, por su parte, las distintas formas en que podía efectuarse la declaración, encareciendo a los sacerdotes que "trabajaran con solícitud para que los fieles encomendados a

(286) 5 de mayo de 1933, "Incautación de cementerios parroquiales", BOE de Burgos, año 76, 15 de mayo de 1933, núm. 7, págs. 101-103.

(287) 10 de mayo de 1933, "Provisorato y Vicaría general del Obispado.-Instrucción sobre cementerios parroquiales", BOE de León, 20 de mayo de 1933, núm. 7, págs. 179-183. Reproducido por el BOE de Orense, año 100, 27 de mayo de 1933, núm. 12, págs. 184-187.

su solicitud obren de acuerdo con esos requisitos legales, a fin de que no se vean privados, contra su voluntad del entierro eclesiástico."⁽²⁸⁸⁾

De contenido más directo era el párrafo que el obispo de Oribuela, Dr. IRASTORZA LOINAZ, incluía en su circular de 15 de mayo de 1933, en la que comentaba la necesidad de efectuar la declaración en términos muy similares a los expresados por el Dr. RUCHA PIZARRO.

"Tampoco se ha buscado en los procedimientos elegidos para hacer constar la última voluntad respecto a los entierros católicos, los más claros y sencillos. En realidad para quienes están bautizados y no han hecho abjuración de su fe era innecesaria toda manifestación sobre el particular."

Una vez formulada esta crítica y con el fin de que los fieles cumplieran, no obstante, todos los requisitos legales, hacía hincapié en el carácter de manifestación "expresa" que requería el reglamento, exhortando a los fieles sobre "la necesidad de hacer sin tardanza dicha manifestación, donde las circunstancias así lo aconsejen, no mediante declaración impresa"⁽²⁸⁹⁾ sino *manuscrita*⁽²⁹⁰⁾. Al final de la circular se incluía, como se hacía en otros boletines, una fórmula o modelo para efectuarla.⁽²⁹¹⁾

(288) s.f. "Secretaría de Cámara y Gobierno.- Circular", BOE DE Segovia, año 78, 30 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 238-239.

(289) En bastardilla en el original.

(290) 15 de mayo de 1933, "Circular.- Sobre incautación de cementerios parroquiales y enterramientos católicos", BOE de Oribuela, año 52, 1 de junio de 1933, núm. 9, págs. 81-83.

La circular del Dr. Rafael BALANZA NAVARRO, obispo de Lugo y Administrador Apostólico de Mondoñedo, recogía la línea marcada por el Dr. RUCHA PIZARRO aludiendo a la conveniencia "para mayor seguridad" de que los sacerdotes y religiosos hicieran la declaración y pasando seguidamente a encarecer a aquellos para que instruyeran a los fieles sobre la forma de efectuarla:

"1a. Aunque el art. 2o del Reglamento dice que los Sacerdotes y Religiosos "podrán" ser enterrados con arreglo a los ritos de su religión, conviene sin embargo que, para mayor seguridad, escriban de su puño y letra y dejen firmada la declaración de que quieren ser enterrados según los ritos de la Iglesia Católica.

"2a. Los Sacerdotes instruirán a los fieles en materia tan interesante, y se prestarán a extender las declaraciones de aquellos religiosos que no sepan escribir, ya que el art. 3o determina que sean manuscritas las formas distintas en que pueden hacerse las manifestaciones expresas relativas al carácter religioso del enterramiento. La forma 3a será la más fácil para los que sepan escribir.

"3a. Informen a los fieles de la necesidad de inutilizar las manifestaciones que tengan ya hechas en declaraciones impresas"" o escritas a máquina y de sustituirlas con declaraciones manuscritas"" con arreglo a las disposiciones del vigente Reglamento.

"4a. Recomienden que la fórmula de la declaración sea lo más breve posible, pues solo es necesario consignar en ella el nombre y dos apellidos, la edad, estado del declarante, y su voluntad de que a su cadáver se le de sepultura eclesialística con rito católico, terminando con la expresión del lugar en que escriban, fecha, y firma o firmas correspondientes.

"5a. Podrá emplearse la siguiente fórmula, o alguna parecida a ella:..."

(291) En pastasilla en el Original.

(292) 18 de mayo de 1933, "Circular.- Sobre cementerios parroquiales y enterramientos católicos", BUE de Mondoñedo, año 76, 20 de mayo de 1933, num. 10, págs. 81-85.

La misma advertencia sobre la conveniencia de que los sacerdotes y religiosos efectuaran la declaración se recogía en la comunicación "Sobre enterramientos con carácter religioso" publicada en el boletín eclesiástico de Tarazona y Tudela y recogida por el de Mallorca, si bien en relación con el escrito del DR. ROCHA PIZARRO, venía aun más matizada que la que hemos visto publicada en el boletín eclesiástico de Mondoñedo, ya que aquí sólo se aludía a que en algunos casos sería conveniente que se efectuara la declaración, suavizando de esta forma la tajante postura iniciada por el vicario general de Toledo.

"Se advierte que, por lo que respecta a los sacerdotes, ministros y religiosos profesos, se dice que podrán^{***} ser enterrados con arreglo a los ritos de sus respectivas religiones si no hubiesen dispuesto lo contrario; de donde se deduce que no es necesaria la manifestación para el enterramiento con el carácter de su religión, aunque siempre podrán^{***} hacerlo y en algunos casos será conveniente la hagan."

En otros puntos seguía, sin embargo, aunque con diversas modificaciones de redacción, el contenido de la circular del Dr. ROCHA PIZARRO; así, en lo relativo a las dificultades que podría suponer que la declaración se efectuara en el registro del juzgado municipal; pasando después a dar detallados consejos -aunque no tan prolijos como los dados por el vicario general de Toledo- sobre la forma de realizarla: lo que debería expresarse, casos de los que no supieran escribir, etc. y señalando que "respecto a los menores de veinte años, la discreción de los Parrocos, atendidas circunstancias, resolverá sobre la procedencia de declaración." Aludía, por último, a la conveniencia de que los Parrocos abrieran un libro de registro de las declaraciones y, para mayor seguridad, que estas se extendieran por duplicado, conservándose un ejemplar en la

parroquia. ""

La comunicacion "Sobre enterramientos con caracter religioso" publicada en el boletin e clesiastico de Iuy en junio de 1933, volvía a la linea propugnada por el vicario general de Toledo:

"Los sacerdotes y religiosos *podran*"" ser enterrados con arreglo a los ritos liturgicos, aunque no hayan hecho declaracion alguna en ese sentido. Mas, siendo muy ambigua la palabra "podran" que emplea el Reglamento y prestandose a interpretaciones muy diversas, es conveniente que sacerdotes y religiosos hagan la declaracion de su voluntad como los demas fieles..."

Esta recomendacion, que no dejaba de ser, tanto en este caso como en los similares que hemos recogido, una manifestacion de desconfianza ante las posibles intromisiones de la autoridad civil, venia seguido de una serie de aclaraciones y consejos sobre los preceptos del reglamento, que eran una sintesis de los contenidos en la circular del Dr. RUCHA PIZARRU; así, en lo referente a la procedencia de efectuar la declaracion, se limitaba a senalar, en linea con la argumentacion contenida en dicha circular:

"a) Haciendo constar esta manifestacion en el Registro que al efecto se lleva en el Juzgado Municipal. A no ser en casos que no sea posible hacerlo en otra forma, no recomendamos este procedimiento, por las dificultades que puede haber para comprobar la inscripcion en el momento oportuno. ""

(294) 11 de mayo de 1933, "Sobre enterramientos con caracter religioso", BUE de Iarazona y Iudela, año 71, 15 de mayo de 1933, num. 731, pags. 277-280. Reproducido por el BUE de Mallorca, año 73, 1 de julio de 1933, num. 13, pags. 268-671.

(295) En bastardilla en el original.

(296) s.f., "Sobre enterramientos con caracter religioso", BUE de Iuy, año 74, 14 de junio de 1933, num. 8, pags. 133-135.

Des adelante, en el mes de septiembre, el boletín de esta misma diócesis insistiría en la cuestión de los enterramientos en la sección dedicada a "Cuestiones Pastorales ante las nuevas leyes civiles", haciendo hincapié en las distintas formas que el reglamento recogía para efectuar la declaración y señalando, sin exclusión expresa del registro del juzgado municipal, que cualquiera podía usarse. También resaltaba que "los sacerdotes, ministros y religiosos profesos de los distintos cultos podrán ser enterrados con arreglo a los ritos de sus respectivas religiones si no hubiesen dispuesto lo contrario". De esta forma se limitaba a recoger determinadas disposiciones del reglamento sin hacer comentario alguno, salvo, eso sí, la advertencia de que las declaraciones no podían ser impresas sino siempre manuscritas ***

El vicario general de Vitoria, Dr. ECHÉGUREN, publicaría, suscrita el 12 de junio de 1933, una circular bajo el extenso título "Sobre la manera de hacer constar la voluntad de ser enterrados católicamente y la anulación de las declaraciones IMPRESAS aunque estén firmadas", al que respondía su contenido, y en la que destacaba expresamente como el reglamento venía a ser más riguroso que la ley:

"En el número anterior de este Boletín se insertó el reglamento para la aplicación de la ley sobre cementerios municipales dictado por el Ministerio de Justicia con un espíritu que viene a agravar la misma ley, ya de sí tan vejatoria de los derechos de la Santa Iglesia y tan ofensiva para los sentimientos católicos."

Esta circular contenía, por otra parte, un error de interpretación de las normas legales, ya que al referirse a las declaraciones de los menores de veinte años destacaba

(297) s.f., "Cuestiones Pastorales ante las nuevas leyes civiles" BUE de Iuv. año 74, 20 de septiembre de 1933, núm. 12, págs. 217-219.

que estas no tenían efecto legal alguno por el simple hecho de que el Reglamento no aludía a ellas.

"...la ley y el Reglamento dejan a disposición de los familiares del difunto, el determinar el carácter del enterramiento, pero, aunque sin efecto legal, puede ser conveniente que también los menores de veinte años hagan declaración de su voluntad de ser enterrados católicamente en su testamento si tienen edad para hacerlo o mediante manuscrito."***

Como se ve claramente era erróneo el señalar que la declaración de los menores de veinte años no tuviera efecto legal alguno, pues el artículo cuarto de la ley establecía que, tanto en estos casos como en los de quienes concurriera incapacidad para testar por causa de demencia, "...el carácter del enterramiento dependerá de la interpretación que de la voluntad del difunto vienen obligados a hacer sus familiares, a no ser que hubiesen dispuesto lo contrario de manera expresa".*** Reconocía, pues, efectos legales a tales declaraciones y si el reglamento regulaba en su artículo 39 los requisitos que debían reunir las realizadas por los incapacitados para testar por causa de demencia, pero no hacía matización alguna para las de los menores, podía interpretarse perfectamente el contenido del artículo 41 como únicamente aplicable para los casos en que tal declaración no existiera (y así lo hacían correctamente, como hemos visto, las normas dadas por el Dr. ROCHA PIZARRO) toda vez que, como tal reglamento, no podía contradecir el contenido de la ley. Ahora bien, al no regular los requisitos de tales declaraciones, se producía

(298) 12 de junio de 1933, "Vicaría General.- Sobre la manera de hacer constar la voluntad de ser enterrados católicamente y la anulación de las declaraciones impresas aunque estén firmadas", BOE de Vitoria, año 69, 15 de julio de 1933, núm. 13, págs. 367-369, Reproducida por el boletín eclesialístico de Santiago de Compostela, año 72, 31 de agosto de 1933, núm. 2702, págs. 354-356.

(299) Ver la nota 7.

una laguna legal que solo podia paliarse mediante el empleo de la analogia, ya utilizada, como hemos visto, por la jerarquia en las instrucciones dadas con motivo de la promulgación de la ley, al indicar que los mayores de catorce años podrian efectuar dicha declaración, ya que esta era la edad valida para testar. El contenido del reglamento hacia preciso, pues, mantener tal intepretacion analogica al no desarrollar los requisitos que debian reunir las declaraciones de los menores de edad.

Curiosamente, y como se desprende de los documentos episcopales, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo desde las instrucciones dadas con motivo de la ley, la jerarquia no insistió en este punto, limitándose a señalar que los menores podrian en ciertos casos -que solia indicar debian ser decididos por la discreción de los parrocos o confesores- efectuarlas. Sea como fuere, y pese a que haya que suponer que en caso de duda sobre la capacidad del menor y consiguiente validez de su declaración deberia resolver el juez municipal si la decision de la familia fuera contraria a tal declaración, no cabe duda que la ley, contrariamente a lo que afirmaba el vicario general de Vitoria en contradicción con la interpretacion dada por otros miembros de la jerarquia, afirmaba que las declaraciones de los menores de veinte años tenian efectos legales plenos.

Las "Instrucciones a los católicos referentes al carácter de los enterramientos" publicadas por el boletín eclesiástico de Zaragoza, se limitaban a reproducir los artículos del reglamento mas relevantes en esta materia, llamando la atención de los fieles "para que sin perjuicio de adoptar cualquiera de las formas que indica el art. 36, cumplan también la indicada en el arft. 27, recogiendo la papeleta de que habla el art. 34."

Los dos últimos artículos citados se referían respectivamente a la creación del registro especial en cada juzgado municipal y a la obligación del juez de entregar al interesado una papeleta en la que se hiciera constar el hecho de la inscripción y la fecha de la misma. El artículo 38 establecía las otras diversas formas en que podía efectuarse la declaración.⁽³⁰⁰⁾ De esta manera, en la archidiócesis de Zaragoza, en lugar de encomendar a la intervención de los párrocos por medio de la creación de un registro parroquial paralelo al del juzgado o por la custodia de ejemplares duplicados de las declaraciones efectuadas -como se establecía en otras diócesis con el fin de garantizar el fiel cumplimiento de la voluntad del difunto, haciendo intervenir a la Iglesia como custodia de tal voluntad a través de procedimientos ajenos a los creados por la autoridad civil y constituyéndola en garante de cualquier fallo o extravío que pudiera producirse en estos- acudía a los mismos mecanismos establecidos por el poder civil, aconsejando como única garantía la realización de la doble declaración: registral y al margen del registro.⁽³⁰¹⁾

Sistema más complejo era el seguido por la diócesis de Zamora, cuyo boletín eclesiástico reproducía textualmente las "Instrucciones" del de Zaragoza, que, al no mencionarlo, venía a hacer suyas; pero a ellas añadía una fórmula de manifestación para las declaraciones manuscritas incluyendo tras ella una "nota" en la que recomendaba que de dicha declaración se hicieran tres ejemplares: uno que llevaría consigo el interesado, otro que se guardaría en sitio conocido por la familia y otro que se enviaría a la parroquia, sistema, pues, que es, entre los recomendados por

(300) Ver el apéndice núm. 2.

(301) s.f. "Instrucciones a los católicos referentes al carácter de los entierros", BOE de Zaragoza, año 72, 1 de julio de 1933, núm. 14, págs. 237-239.

la jerarquía, el más puntilloso y el que, por tanto, encierra mayor desconfianza sobre los mecanismos regulados por el Poder ejecutivo.⁽³⁰²⁾

Queda por referirnos, para acabar, a la "Circular sobre cementerios y enterramientos" firmada por el arzobispo de Sevilla, Dr. Eustaquio ILUNDAIN ESTEBAN, el 16 de junio de 1933 y en la que, de forma muy breve y tras haber aludido extensamente, como antes se ha reseñado, al tema de la incautación de los cementerios, llamaba la atención "de todos" sobre las diversas formas establecidas en el artículo 38 del reglamento para realizar la manifestación expresa de voluntad sobre el carácter religioso del enterramiento, encareciendo la necesidad de hacerla sin tardanza, "donde las circunstancias locales así lo aconsejen" e indicando que dicha manifestación no podía hacerse en declaración impresa, sino manuscrita.⁽³⁰³⁾

Como se ve en esta circular no se descendía al caso de la declaración a realizar por sacerdotes y religiosos, que quedaba subsumido, conjuntamente con los fieles, en el término "todos" y que, por tanto, cabe entender también se recomendaba que la realizaran donde las circunstancias locales así lo aconsejaran, irase esta última que es nuevo ejemplo de la desconfianza de la jerarquía por la actuación de algunas autoridades locales y que se formulaba con independencia de la norma legal que exigía realizarla en todos los casos cuando se tratara de seculares.

(302) s.f., "Instrucciones a los católicos referente al carácter de los enterramientos", BOE de Zamora, año 70, 31 de julio de 1933, núm. 11, págs. 254-256.

(303) 16 de junio de 1933, "Circular sobre cementerios y enterramientos" BOE de Sevilla, año 76, 20 de junio de 1933, núm. 1227, págs. 162-174.

Para cerrar este epigrafe - ya que este fue un tema no tratado por las conferencias de metropolitanos- queremos mencionar, por ultimo, el contraste que supone lo hasta ahora comentado con la noticia publicada en la "Crónica diocesana" del boletín eclesiástico de Toledo en diciembre de 1933 y con la que se queria poner de manifiesto la improcedencia de la normativa dictada por la autoridad civil, toda vez que, aun aquellos que, segun las circunstancias de la epoca, cabia considerar como ateos o suponer, cuando menos, que lo eran, como eran los entonces afiliados a los partidos comunista o socialista, eran, en todo caso en su fuero interno, fieles hijos de la Iglesia y, como tales, así habia sido su sepultura. Dada la muestra paradigmatica de la fraseologia y pensamiento cristiano de la epoca, no nos resistimos a transcribir integra esta cronica.

"Horrible accidente en Huescar.- Toda España se entero con horror de la muerte de un numeroso grupo de obreros de Huescar (Granada) cuando regresaban de un pueblo proximo en el que habian asistido a un mitin socialista. Todos, excepto uno, perecieron al despeñarse el vehiculo en un profundo precipicio.

«Nuestro Prelado se apresuró a enviar un telegrama de pésame al señor Párroco-Arcipreste de Huescar, encargándole que expresara su sentimiento a las familias de las victimas, a las autoridades y al pueblo y ofreciendo sus oraciones en sufragio de los que en circunstancias tan tragicas hallaran la muerte. Confiaba Su Excelencia que, no obstante estar las victimas asociadas al partido socialista y haber asistido a un mitin en que los oradores profirieron muchas blasfemias, serian, como tan a menudo sucede, infelices obreros engañados, a quienes las predicaciones sectarias han alejado de la Iglesia, pero sin poder arrancar los sentimientos cristianos de su corazon.

«Y así ha sucedido. Todos ellos, excepto dos -y entre estos el único superviviente de la catástrofe- pertenecían efectivamente al partido socialista; pero todos, dice el Sr. Arcipreste, llevaban crucifijos, medallas y escapularios.

«Por el eterno descanso de las víctimas se celebró en la parroquia un funeral que, con la cooperación del Clero, Hermandades, señoras y señoritas catequistas, resultó solemnisimo. Con este motivo todo el pueblo se asoció al dolor de las familias de las infortunadas víctimas, uniéndolos a todos a la vez que el dolor y las lágrimas, una misma fe y una misma esperanza.

«Cuando un candidato socialista quiso pronunciar un discurso en el cementerio, la concurrencia se lo impidió, estimando, con razón, como una profanación sacrilega cuanto no pudiese llevar el sello de la fe cristiana en el sagrado recinto donde todo había de la eternidad.» (194)

7. La cremación de cadáveres. Obispos y arzobispos de León, Toledo, Tarragona, Tuy, Calahorra y La Calzada, Tarazona (administración apostólica de Tudela), Barcelona y Segovia.

Ya el obispo de León, Dr. José ALVAREZ MIRANDA, al tratar en su pastoral de 27 de noviembre de 1931 de los cementerios, tocaría sucintamente el tema de la cremación de los cadáveres, para achacar la defensa de esta práctica al influjo de sectas laicistas y, de acuerdo con la doctrina eclesiástica de la época, condenarla, recomendando a sus fieles, con lo que hoy no dejan de parecer ingenuas frases, que no se apartaran de los mandatos de la Iglesia.

"Hace años también se procuró con empeño introducir la cremación de cadáveres, que está prohibida por la Iglesia, y es coartricia a los sentimientos naturales del hombre y a la tradición religiosa, y no prosperó a pesar de los trabajos de las sectas. De cuando en cuando vienen así como tempestades de furor antirreligioso, y pasan... Dios haga que ahora suceda lo mismo, y muy de veras deseamos, que nuestros amados diocesanos, tanto los que ejercen autoridad como los subditos no se aparten de la doctrina de la Iglesia, que es lo mejor, lo más honroso, útil y conveniente para los vivos y difuntos. Nada hagan, por consiguiente, que sea opuesto a las instituciones de la Iglesia, y a la legítima libertad de los fieles y de todos los demás." (305)

Al mes escaso de tales recomendaciones la cremación de cadáveres sería autorizada en España.

(305) 27 de noviembre de 1931, "Instrucción Pastoral". BOE de León, 1 de diciembre de 1931, núm. 22, págs. 573-602.

Sin embargo, la promulgación del decreto de 8 de enero de 1932 por el que, bajo ciertas condiciones, se autorizaba a los ayuntamientos a practicar en sus cementerios la incineración de los cadáveres y de sus restos, produjo escasa reacción en la jerarquía si consideramos que en aquel entonces la Iglesia reputaba esta práctica prohibida en base al dogma de la resurrección de la carne. Más si bien esta reacción fue escasa, la que hubo no dejó de ser terminante.

Nuevamente el Dr. ROCHA PIZARRO fue el pionero en recordar a los fieles la doctrina canónica sobre este tema, recordatorio que efectuó con carácter inmediato a la publicación por el poder civil del citado decreto, y, así, el boletín eclesiástico del mismo mes de enero de la archidiócesis que en aquellos momentos regentaba, incluía un extenso escrito, sin fecha ni firma, analizando pormenorizadamente la cuestión desde el prisma que entonces informaba los mandatos eclesiásticos y que daba al comentario lo que hoy no deja de parecer una singular dureza.

Para el redactor de este documento la postura republicana no ofrecía lugar a dudas; empeñada, como estaba, en introducir el laicismo a toda costa, no solo pretendía secularizar los distintos órdenes de la vida, sino que quería "penetrar en los confines de la muerte" y, así, aprobada ya la ley de secularización de cementerios, "como si esto fuera aun poco", intentaba introducir "la pagana costumbre de la cremación de los cadáveres."

Esta pretensión, continuaba el comentarista, no podía tener éxito inmediato, tanto por lo que repugnaba a las costumbres y sentimientos españoles como por el alto coste de las instalaciones requeridas, que los ayuntamientos no

querrian asumir. No consideraba, además, verosímil que en España se fundaran asociaciones para financiarlas, ni -continuando con los argumentos económicos- que hubiera empresas que arriesgaran su dinero en un negocio que, según él, ofrecía pocas esperanzas de lucro. Mas en previsión de que tales consideraciones pudieran resultar erróneas debido al afán secularizador de las instituciones ("Con todo, bien pudiera suceder que la pasión sectaria que se ha apoderado de muchas entidades oficiales, inspirase a alguna de estas el deseo de señalarse, haciendo alarde de espíritu progresivo y de menosprecio de las doctrinas y prácticas cristianas") era conveniente que los católicos supieran que era la cremación de los cadáveres y lo que la Iglesia enseñaba sobre esta práctica.

Explicaba, pues, que la cremación de cadáveres no era en sí opuesta al derecho natural, pero a los sentimientos inspirados por el cristianismo y aun a muchos pueblos paganos de la antigüedad era práctica que naturalmente repugnaba y que la extensión de la religión cristiana acabó haciendo desaparecer hasta que a mediados del siglo XVIII se inició en Italia una campaña en su favor. Esta campaña dio lugar a una fuerte propaganda, a la fundación de "sociedades crematorias" y a la construcción de crematorios en los países más industrializados, en base a la defensa de las ventajas de una práctica más higiénica y que ocupaba menos extensión de terreno, razones estas que, para el comentarista, tenían otro claro trasfondo.

"Pero estas y otras razones que suelen alegarse no son, las más de las veces, sino pretextos. Y detrás de esos pretextos está el prejuicio irreligioso o el odio sectario. De ahí que muchas de las sociedades que promueven la cremación sean masonicas o afiliadas a la masonería."

Este "perjuicio sectario" venia determinado por la idea de que, desaparecidos los cementerios, el pensamiento de las postrimerias y de una vida futura iria diluyendose en la mente de los hombres, como si preciso fuera que, para no olvidar la vida compartida con los que fallecieron, sus restos tuvieran que continuar en algun lugar y que esta permanencia fisica fuera el fundamento del dogma que, con paradojico argumento, el redactor citaba.

"La campana en favor de la cremacion es una prolongacion de la campana secularizadora de los cementerios. Destruyendo los cadaveres, se destruye tambien el recuerdo de los muertos y el pensamiento de la otra vida. Ya no basta secularizar los cementerios, se quisiera suprimirlos, borrar el recuerdo de los que en ellos yacen, romper ese lazo que une a los que viven y a los que ya murieron, y que tiene la mas alta y sublime expresion en el consolador dogma catolico de la comunion de los Santos."

Por estas razones los primeros cristianos rechazaron la cremacion, sin casi necesidad de la intervencion eclesiastica, asumiendo la practica hebrea de la inhumacion, acorde no solo con los sentimientos naturales sino con las ensenanzas de la revelacion.

Hubia considerar, no obstante, las practicas crematorias del pasado, cuando algunos pueblos paganos quemaban los cadaveres de sus allegados en piras funerarias mientras se unian en plegarias con sus dioses. Aun en estas costumbres "habia cierta grandeza", "pero en las modernas cremaciones ni aun siquiera se ha sabido conservar lo que, en medio de sus errores, conservaron los paganos".

Para el redactor de este escrito un argumento mas en contra de la cremacion que ahora se permitia era, precisamente, la forma material de realizarla.

"La misma periección de los medios que hoy se usan para la cremación, son un insulto a la natural piedad del corazón humano, que no pueda avenirse a que se destruya el cadáver de una persona hecha a imagen y semejanza de Dios como se destruyen, mediante una complicada maquinaria, los detritus que se recogen por la calle. Aplicar a esta obra de destrucción los progresos de la industria, es profanarlos. Hacer que pase por un cadáver una fuerte corriente eléctrica que lo convierta en carbón incandescente, solo podrá parecer un progreso a quien confunda el corazón humano con la rueda de una máquina."

Por todo ello había que concluir que

"... la cremación de los cadáveres humanos es contraria a nobilísimos sentimientos del corazón humano, opuesta a la tradición de la Iglesia, e inadecuada para expresar el hondo simbolismo cristiano que tan bien expresa la inhumación."

Mas a estas graves razones había que sumar, para oponerse con mas fuerza a la práctica de la cremación, "la significación materialista y anticristiana que le han dado sus defensores." Ello había llevado a la Iglesia a reprobación en varias ocasiones, prohibiendo a los fieles ordenar la cremación tanto para si como para otros y pertenecer a asociaciones que pretendieran propagarla, privando de sepultura eclesiástica en determinados casos a los que por propia voluntad hubieran sido incinerados y prohibiendo los últimos sacramentos a los que se negaran a modificar su voluntad de que sus cadáveres fueran sometidos a esta práctica así como la celebración pública por ellos de la misa, amén de proscribir toda cooperación en las prácticas crematorias. Prohibiciones, todas ellas, que venían reforzadas por las expresas disposiciones de los cánones 1.203 y 1.240 del Código de Derecho canonico, con las penas establecidas en el 2.339. (367)

(367) Ver en el apéndice núm. 9 los cánones citados.

Esta postura eclesiástica bastaba para ver claramente, según el comentarista, "cuan peligrosa, nociva y reprobable es la cremación de los cadáveres humanos" y, por ello esperaba que en España fueran muy raros los casos de cremación, lo que era "una razón más para que no se pensara en disposiciones que nadie ha pedido y que ofenden a los sentimientos de la mayor parte de los españoles y son contrarios a la doctrina y práctica de la Iglesia."

Por todas estas consideraciones finalizaba el documento haciendo la siguiente reconvencción a los fieles, que no dejaba de enlazar con la declaración de voluntad de entierro católico determinada por la ley:

"Los católicos deben vivir advertidos y no han de contentarse con no pedir la cremación, sino que positivamente deben disponer en su testamento, o en forma que no otrezca lugar a duda, que sus cadáveres sean enterrados conforme al rito de nuestra Santa Madre la Iglesia."

Con independencia de este documento, tan solo hemos encontrado alusión al tema por la pluma directa de los obispos en cuatro casos: en la extensa pastoral del cardenal VIDAL Y BARRAQUER de 21 de febrero de 1932, en la pastoral del Dr. Antonio GARCIA Y GARCIA, obispo de Tuy, de 24 de febrero de 1932, en la del Dr. Fidel GARCIA MARTINEZ, obispo de Calahorra de 17 de marzo de 1932 y en la del Dr. GUMA de 31 de marzo de 1932.

Normas expresas sobre la cuestión serían publicadas, por su parte, por los boletines eclesiásticos de las diócesis de Barcelona y de Segovia, en 8 de marzo y 31 de octubre de 1932, respectivamente.

(308) s.1, "La cremación de los cadáveres". BDE de Toledo, año 88, 16 de enero de 1932, núm. 2, págs. 30-35. Este documento sería reproducido, entre los boletines eclesiásticos consultados por los de Zaragoza (año 11, 2 de mayo de 1932, núm. 9, págs. 174-181) y Astorga (año 88, 16 de mayo de 1932, núm. 10, págs. 164-171).

En la pastoral del cardenal VIDAL Y BARRQUER, tras una referencia similar a la que hemos visto efectuada en el documento publicado por el boletín eclesiástico de Toledo, sobre la tradición, practicada por la mayoría de los pueblos, de inhumar a sus difuntos como expresión del hondo y universal sentimiento de la inmortalidad del alma, se describía como el cristianismo se adaptó a la forma de enterramiento de los pueblos en que se había ido asentando, pero rechazando siempre la cremación, reiteradamente prohibida por la Iglesia.

"...el Cristianismo se acomodó, en la forma de tumular a sus difuntos, al uso que encontro en los pueblos que iba evangelizando, siempre abominando de la cremación, que ha sido reiteradamente condenada por la Iglesia en varias ocasiones, figurando esta reprobación en el canon 1203 del Código de Derecho Canónico, en el que se prescribe además que, si alguno de los fieles, de cualquier modo que sea, mandase que su cadáver sea quemado, es ilícito ejecutar en esto su voluntad y que, si esta cláusula se añadiera a un contrato, a testamento o cualquier otro acto, se tenga por no añadida. La Congregación del Santo Oficio, por decreto de 19 de junio de 1926, excitó nuevamente el celo de los Prelados recordando que la cremación de los cadáveres, aunque no sea esencialmente mala y pueda consentirse, y de hecho se consienta, en circunstancias extraordinarias, cuando lo exija una causa cierta y grave que se refiera al bien público, nadie ignora sin embargo que practicar dicha cremación o fomentarla como cosa corriente que pueda hacerse de ordinario, es impio, escandaloso y, por consiguiente, gravemente ilícito."

De ahí que más adelante, al hablar del derecho de jurisdicción eclesiástica, señalara que, derivado de él era el que tenía la Iglesia "de admitir y reclamar los cadáveres dignos de sepultura eclesiástica y de rechazar los indignos", punto en el que insistiría indicando que era "cosa pertinente al derecho público, que no puede mudarse por voluntad privada" y que la Iglesia no privaba de este

derecho inherente a todo cristiano, sino era imponiendo esta privación como pena de algún delito, entre los que, según el canon 1.240, figuraba el de "los que mandaron quemar su cadáver, y permanecieron en esta voluntad notoriamente hasta su muerte".⁽³⁰⁹⁾

El obispo de Tui, por su parte, en la citada pastoral de 24 de febrero de 1932, tras aludir a los cánones del Código de Derecho canónico que trataban del tema de la cremación de los cadáveres, insistiría, breve y tajantemente, en la prohibición eclesiástica de esta práctica.

"Véase, pues, cuanto repugna a la ley de la Iglesia lo que en España se ha dispuesto sobre la cremación de cadáveres. Sepase que la Iglesia Católica, a la que estamos obligados a obedecer, prohíbe la cremación de los cadáveres de sus hijos y por tanto quien ordene que el cadáver de un católico sea quemado peca muy gravemente y conculca una prohibición gravísima de la Iglesia."⁽³¹⁰⁾

El Dr. Fidel GARCÍA MARTÍNEZ, tras señalar en su pastoral el derecho de la Iglesia a sentar los principios y dictar las leyes o disposiciones relativas a los cementerios y sepulturas eclesiásticas, recogía las contenidas en el Código de Derecho canónico sobre materia de enterramientos sintetizándolas en siete apartados, de los cuales el último indicaba:

(309) 21 de febrero de 1932, "Pastoral de Cuaresma", BOE de Tarragona, año 42, 29 de febrero de 1932, núm. 30, págs. 529-575 y *Església i Estat durant la segona...*, II, pág. 562-580. Sobre los cánones citados por el cardenal ver el apéndice núm. 9.

(310) 24 de febrero de 1932, "Instrucción Pastoral acerca de los Cementerios y protesta razonada contra la secularización de los mismos", BOE de Tui, año 73, 29 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 71-90.

"Queda prohibida la cremación de cadáveres (Canon 1203.1)."

Disposición que pasaba a comentar seguidamente:

"La razón de esto último está en el mismo respeto religioso a los cuerpos que fueron morada de almas redimidas y santificadas por Jesucristo y, como tales, templos del Espíritu Santo, instrumentos de buenas obras, consagrados por los Sacramentos y llamados a una vida nueva o resurrección; ideas todas con las que la cremación, sin ser de suyo esencialmente mala, choca de modo notable, por lo que nunca la ha admitido la Iglesia."⁽³¹¹⁾

Más extenso, como era de esperar, sería el tratamiento que, por último, daría a esta cuestión el obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela, Dr. Isidro GOMA en su pastoral de 31 de marzo de 1932, uno de cuyos epígrafes era dedicado exclusivamente a ella.

Para el prelado se trataba, sencillamente, de una "práctica repugnante que tenemos la seguridad de que no arraigará en nuestra tierra", mas a la que había dado actualidad el decreto de 8 de enero, entrando de lleno en un campo que pertenecía a la disciplina eclesial.

Recordando el crematorio que el mismo había visto en el cementerio de Milán, indicaba como tenía en su portico una inscripción "de sentido totalmente materialista", ya que no era otra "la tendencia del sistema crematorio, que forma parte de la ideología masonica."

Esta contundente afirmación implicaba un claro peligro para el obispo, consecuencia del materialismo buscado, y era que el necesario apoyo a la fe popular que la existencia de cementerios encerraba, sería, sin duda,

(311) 17 de marzo de 1932. "Instrucción Pastoral sobre Cementerios y enterramientos". BOE de Calahorra y La Calzada, año 73, 22 de marzo de 1932, núm. 4, págs. 42-50.

menoscabado si prosperaban las tendencias que ahora se querian introducir. La paternalista postura de la jerarquia de la epoca brilla una vez mas en las irasas con que el Dr. GOMA exponia este razonamiento, que, en casi su totalidad, no deja de parecer desorbitado comparandolo con una conciencia cristiana de hoy en dia:

"El cadaver, aun siendo materia inerte, nos habla de la sobrevivencia del hombre; si desaparece el cadaver fallara en el epiritu popular, que se deja llevar de lo sensible, uno de los argumentos de la inmortalidad. Lo mismo podriamos decir del dogma de la resurrección futura; a los espiritus simples, que no conocen de sustancias, de transformación y perduración de la materia en sus primeros elementos, se les hará mas difícil creer en la resurrección de un incinerado, del que no queda mas de un puñado de informe ceniza, que en la de un sepultado por el procedimiento corriente de inhumación. Va tambien el sistema contra la jerarquia, y especialmente contra el culto de los santos."

Estas exageradas palabras eran, no obstante, inmediatamente matizadas: bajo el aspecto dogmatico no habia, en realidad, nada que oponer al sistema de la cremación, pero si era antidogmatica "la tendencia de la cremación... a lo menos en la intencion de sus propugnadores", como bastaba para demostrarlo que esta practica figurara en el programa de los masones y que ellos mismos hubieran proclamado, con ocasión de su implantación en Francia, que lo que, en un primer momento, como ahora sucedia en España, era simple autorización, pasaria necesariamente a ser obligatorio.

Este proyecto, sin embargo, no era para el prelado tan fácil de cumplir,

"La naturaleza se rebela contra ello; y se rebela por dos motivos: por el ultraje que se comete contra el cuerpo humano sometiendo a la acción del elemento devorador, y por la ofensa que se

infiere a la misma piedad natural que tiende a la conservacion indefinida de los seres queridos."

La Iglesia, pues, era, salvo que lo exigiera un gravísimo peligro para los vivos, "resueltamente opuesta a la cremación de los cadáveres", ya que ello repugnaba a los "sentimientos de piedad para con los restos mortales de sus hijos", teniendo "razones poderosas de orden espiritual para no permitir la práctica abominable." Así lo había predicado desde los primeros tiempos, en que los cristianos "veían con horror las hogueras funerarias de los paganos, contrarias a la piedad exquisita que siempre tuvo la Iglesia con sus difuntos y hasta a la esperanza en los futuros destinos de nuestros cuerpos, a quienes Dios reserva, junto con nuestras almas, una gloriosa inmortalidad."

Por todo ello concluía el obispo recordando que pecaban los que, "sin una razón de carácter general que lo justifique a los ojos de la Iglesia", ordenaran la cremación de un cadáver, tal como establecían los canones del Código de Derecho canónico que citaba y que ya hemos visto recogidos en los escritos de los otros preladados, canones que en las "Normas prácticas" que figuraban al final de esta instrucción pastoral, pasaba a explicitar, complementándolos con instrucciones dictadas por la Congregación del Santo Oficio.⁽³¹²⁾

(312) "No es lícito cumplir la voluntad de quienes hubiesen dispuesto la cremación de su cadáver, cualquiera que sea la solemnidad con que hubiesen manifestado esta su voluntad (Canon 1203).- Está prohibido por la Iglesia disponer la cremación del propio cadáver o el de otros, así como dar el nombre a sociedades que tuviesen por objeto propagar esta práctica reprobable (Cong. S. Oficio, 19 mayo de 1886).- Los pastores de almas, especialmente en caso de peligro de propaganda doctrinal, y más si se intentara llevar a la práctica la cremación, deberán instruir a los fieles sobre el detestable abuso de la cremación de los cadáveres, procurando apartar de ella a los cristianos. Es mandato de Su Santidad León XIII al aprobar la declaración del Santo Oficio a que se hace referencia en el número anterior.- A los fieles que hubiesen ordenado la cremación de su cadáver y no quieran retractar esta voluntad, no se les pueden administrar los Sacramentos ni aplicarseles públicamente la santa Misa, aunque si privadamente (S. Oficio, 27 julio 1892).- Tampoco se puede conceder

La ya comentada "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", publicada por el boletín eclesiástico de Barcelona, si bien, como hemos apuntado, trataba los distintos aspectos introducidos por la ley secularizadora de cementerios, comenzaba refiriéndose al decreto de 8 de enero de 1932, sobre incineración de cadáveres, reiterando la protesta eclesiástica por el agravio que la nueva legislación suponía a los derechos de la Iglesia y señalando que el propósito de la publicación que se hacía era el de orientar a sacerdotes y fieles ante las nuevas normas en relación con las disposiciones eclesiásticas, singularmente en lo que pudiera afectar a sus relaciones con las autoridades municipales.

"De todos conocida es la herida que, entre otras varias, se ha inferido a los intereses de la Iglesia Católica en España con la nueva legislación funeraria, y frecuentes son los conflictos en los que, en su aplicación, se encuentran los Rdos. Sacerdotes y fieles, amantes de no apartarse de las normas dictadas por los sagrados Cánones y por la competente Autoridad Eclesiástica. Por eso creemos de suma utilidad publicar en este Boletín el siguiente estudio, que, además de ser un breve comentario a las recientes disposiciones civiles referentes a esta materia, contiene las normas seguras que deben seguirse en los diversos casos que pueden presentarse en la aplicación de la ley, en sus derivaciones y singularmente en las relaciones con las autoridades civiles de los pueblos."

sepultura eclesiástica a los que hubiesen preferido voluntariamente la cremación de su cadáver y se hubiesen mantenido cierta y notoriamente en esta voluntad (S. Oficio, 15 diciembre 1886).- En cambio puede darse sepultura eclesiástica y ofrecerse sufragios según el rito de la Santa Iglesia a aquellos cuyo cadáver hubiese sido incinerado contra la propia voluntad (S. Oficio, 15 diciembre 1886)."

30 de marzo de 1932, "El laicismo póstumo.- Instrucción Pastoral sobre cementerios y sepulturas". BOE de Tarazona y Tudela, año 70, 31 de marzo de 1932, núm. 704, págs. 207-239.

Realizada esta aclaración, y basándose en los preceptos establecidos en los cánones ya vistos, puntualizaba que la cremación de cadáveres era reprobada por la Iglesia y desmenuzaba la casuística que de los citados cánones se derivaba.

"A) El que ordene que el cadáver de un católico sea quemado, peca gravemente. B) No puede darse sepultura eclesiástica a quien en vida haya dispuesto la cremación de su cadáver (Canon 1240, § 12) Acerca de este caso, si ocurre alguna duda, consúltase al Ordinario (Canon 1240, § 2) C) Téngase presente que según el Canon 1241 la privación de sepultura eclesiástica importa también la denegación de toda Misa exequial, aun de aniversario, y de todo acto funeral público." (13)

Debemos referirnos, para finalizar, a las breves instrucciones recogidas en el boletín eclesiástico de Segovia ya en octubre de 1932 y que no hicieron más que recordar la prohibición eclesiástica de la práctica que comentamos, aludir a la publicación del decreto de 8 de enero, y reproducir los apartados A), B) y C) que acabamos de transcribir del boletín eclesiástico de Barcelona. (14)

Como síntesis y valoración final de este capítulo es preciso destacar el afán secularizador de la República empeñada no solo en afrontar cuestiones que podían propiciar el cambio social, como era la de la enseñanza, o paliar graves situaciones de convivencia, como se pretendió conse-

(313) 8 de marzo de 1932, "Instrucción sobre cremación de cadáveres, cementerios y enterramientos", BOE de Barcelona, año 75, 16 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 108-120. Reproducido por el de Mallorca, año 72, 31 de marzo de 1932, núm. 8, págs. 172-184.

(314) s.f., "Cremación de cadáveres", BOE de Segovia, año 77, 31 de octubre de 1932, núm. 20, págs. 435-436.

guir con la introducción del divorcio, sino en laicizar todos los ámbitos de la convivencia por mor de lograr la proclamada libertad de conciencia.

De esta forma, y como expropiación de otro privilegio hasta entonces detentado por la Iglesia, tuvo especial empeño en que los ciudadanos pudieran elegir la forma y lugar de su sepelio, así como en que los recintos hasta entonces sagrados y administrados por el estamento eclesiástico, dejaran de serlo y, sobre todo, dejara de existir en ellos la discriminación del lugar civil (llegado a llamar en el argot eclesiástico de la época el "corralillo"), sobre el que también la Iglesia tenía la última palabra decisoria sobre quien merecía ser enterrado allí.

Fueron así numerosas las normas tendentes a lograr estos propósitos, algunas de las cuales, pretendiendo llegar a respetar hasta el máximo la voluntad del difunto, no dejaron de ser un verdadero atentado contra la mayoría católica del país, a la que se le pasaba a exigir -como había sucedido, en un principio, con el caso de la enseñanza de la religión en las escuelas oficiales- una declaración de voluntad expresa acorde con sus creencias, que, en este caso, se ceñía a manifestar el deseo de enterramiento católico. Otras iban a lograr la desaparición de la discriminación de lugares de enterramiento según se fuera o no creyente, propiciando, en primer lugar, el derribo de las tapias de separación de los recintos confesionales y civiles y favoreciendo, en segundo lugar, el que fueran los municipios y no las parroquias quienes pasaran a administrar los camposantos, bien mediante la construcción de nuevos cementerios municipales, bien mediante la incautación de los de carácter parroquial; prohibiéndose, por otra parte, mas inhumaciones en los cementerios de carácter privado, que pasaban a clausurarse.

Otras normas, en fin, al posibilitar la cremación de cadáveres, no dejaron de hacer llamar a la jerarquía al introducir una práctica radicalmente contraria a la conciencia católica de la época.

Todas estas medidas, y singularmente las que atañían al ritual de la conducción de enterramientos, derribo de las tapias de separación de los cementerios o incautación de los parroquiales, tuvieron, como tantas veces sucedería en este primer bienio, una singular defensa a nivel de autoridades locales, uno de los principales oponentes que, en estas cuestiones, tuvo que arrontar la jerarquía en esta andadura inicial de la República, viéndose, así, forzada no solo a defender la virtualidad de sus doctrinas, con la consiguiente y reiterada explicación de lo que, para el catolicismo, representaba el lugar sagrado del cementerio, sino también sus derechos de propiedad sobre recintos en los que hasta entonces había tenido plena jurisdicción.

Ello daría lugar a una larga serie de escritos de los prelados en los que, una vez más, se observa gran disparidad de criterio en los matices de sus palabras, que irían desde una clara agresividad ante los actos de la autoridad civil a la más cristiana mansedumbre y desde el autoritarismo manifiesto, a consejos llenos de paternalismo cerca de la conciencia de los fieles, resultando evidente de nuevo la falta de postura unívoca de la jerarquía en una cuestión en la que, a diferencia de lo que había sucedido en el caso del matrimonio civil, no se había publicado un documento colectivo monográfico y, por tanto, salvo el párrafo contenido en el documento de 25 de mayo de 1933 sobre el tema, no existía un criterio uniforme del episcopado.

CONCLUSIONES

La posesión por parte de la Iglesia católica española de una larga serie de privilegios a lo largo de nuestra historia que, con vaivenes determinados por los gobiernos liberales, unas veces tímidamente y otras atacándola de frente, estuvieron indudablemente asentados en las dos últimas dictaduras sufridas por nuestro país, hace no solo relevante, sino de indudable actualidad afrontar el estudio de la reacción de la jerarquía eclesiástica cuando dos regímenes democráticos, el de 1931 y el actual, quisieron, o quieren, afrontar la modernización de una sociedad demasiado encorsetada en estructuras mentales tradicionales a las que en modo alguno ha sido ajena la doctrina eclesiástica.

No cabe duda, empero, que, si reacciones similares cabe encontrar entre uno y otro período, también hay muy marcadas diferencias. Por parte de la Iglesia, las tesis que todo católico, y singular y lógicamente, el episcopado, se veía obligado a defender en 1931 han venido a ser dichosamente transformadas por el Concilio Vaticano II. Por parte del poder político, la evolución en el pensamiento más liberal y progresista -y ¿por qué no?, el aprendizaje sobre las experiencias y errores que en la época objeto de este trabajo se cometieron- le han hecho entender que no pueden ni achacarse todos los males de un país a los privilegios mantenidos por una confesión en la que participa la mayoría de sus ciudadanos ni, precisamente por ello, atacar de frente a esa confesión; prueba de ello es, sin duda, el contenido de los artículos 16, 27 ó 32 de nuestra vigente Constitución y el de los debates que los originaron.

Temas hay sin duda coincidentes en una y otra época. ¿Quien no recuerda la actitud de muchos obispos de hoy ante las elecciones de 1977 o sus pronunciamientos en la cuestión de la enseñanza?. ¿Como no pensar en la cuestión de la extinción del presupuesto destinado a la Iglesia católica y en los debates sobre el famoso y actual 0,5 % del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas? Otros, sin embargo, son totalmente divergentes. Tan imposible era para la sociedad española de 1931 polemizar sobre la cuestión del aborto como es para la actual gastar tinta acerca de la secularización de los cementerios. Es el uno tema de entonces de nuestros días, fue el otro batalla singular de las autoridades civiles y eclesiásticas de la segunda República.

Mas si cabe hablar de algunas analogias en las materias en discusión, no cabe, desde luego, como ya hemos apuntado y por las razones indicadas, hacer la misma afirmación en cuanto a las reacciones de los dos poderes. El comparar uno y otro momento de nuestra historia no es, no obstante, objeto de nuestro trabajo, pues solo el paso del tiempo permitirá hacerlo con la necesaria perspectiva. Creemos, sin embargo, que la aportación que aqui presentamos podrá servir en el futuro para esta tarea y ayudará a conocer un momento de nuestro reciente pasado poco investigado a nivel político-religioso, lo que ha hecho que, en ocasiones, se dieran enfoques demasiado simplistas y uniformadores de la actitud con que la jerarquía católica quiso incidir en las conciencias de los creyentes españoles en un singular momento de cambio histórico.'''

(1) Ver una somera y lúcida referencia a las profundas diferencias entre uno y otro periodo en el trabajo de Luis PRIETO SANCHIS *Las relaciones Iglesia-Estado a la luz de la nueva Constitución: problemas fundamentales*, en "La Constitución española de 1978", estudio sistemático dirigido por los profesores Alberto Predieri y E. García de Enterría, Madrid, 1980, págs. 307-362.

Así, la carencia de un análisis de los documentos de la jerarquía en este primer período de la República ha hecho que muchos autores valoren la actitud del cardenal SEGURA y el contenido de su pastoral de 1 de mayo de 1931 como un hecho singular en el conjunto de la Iglesia española y que, incluso, sitúen en ella la primera reacción contraria del primado. Lo fue indudablemente a nivel de opinión pública, pero con anterioridad a este escrito, sin embargo, ya éste, nada más proclamarse la República, había dejado entrever su actitud contraria al nuevo régimen y añorante de su llorada monarquía. Frente a él, y con igual urgencia, sin conocer aún las instrucciones de la Santa Sede sobre el acatamiento a los nuevos poderes constituidos, otros miembros del episcopado se apresuraron a aconsejar la leal cooperación con la nueva situación, tal como hicieran los arzobispos MELO, GANDASEGUI e ILUNDAIN, o los obispos ALVAREZ MIRANDA o MUGICA (este último a pesar de haber suscrito ante las elecciones del 14 de abril una pastoral muy discutida),⁽²⁾ a cooperar cerca de las nuevas autoridades, como VIDAL, a manifestarse en forma tan solo cautelosa y expectante ante los futuros acontecimientos, como IRURITA, BALANZA NAVARRO, VILA MARTÍNEZ, PARRADO GARCÍA, PERELLO y POU, MÚNIZ PABLOS... o, finalmente, suscribieron documentos que solo cabe ver hoy como positivos, como haría el obispo de Oviedo, LUIS Y PÉREZ.

Frente a ellos, y en un abanico de posturas que solo se inicia en la historia eclesiástica española con el período de la segunda República, otro sector de la jerarquía no dejó de unirse al carro del primado y enfocar negativamente el cambio: arzobispo DOMENECH VALLS, obispos COLON y CANALS, PÉREZ MUÑOZ, MIRALLES Y SBERT, GOMA...

(2) Ver el apéndice núm. VI.

Tal distinta actitud, que la falta de estudio de los documentos episcopales antes apuntada, ha hecho que no sea valorada suficientemente por la bibliografía existente sobre la segunda República, continuaria manteniéndose por los prelados en todo el primer bienio de la segunda República, si bien ello no quiere decir que su pensamiento, progresista en ocasiones para lo que era la mentalidad católica de la época, o marcadamente intransigente, se diera por los mismos protagonistas ante los diversos problemas, si bien sus distintos pronunciamientos no dejaron de tener un similar enfoque ante cada ataque contra los privilegios o derechos eclesiásticos.

1. Tres singulares y graves hitos se dieron en este primer periodo suficientes para hacer clamar a toda la jerarquía: la expulsión de España del cardenal SEGURA -cuyo inicial protagonismo queriendo asumir la conducción de la Iglesia toda en España y la protesta de sus hermanos en el episcopado por ello no ha sido quizá la suficientemente destacado- la del obispo MUGICA y la quema de iglesias y conventos, hecho este último al que algunos autores atribuyen el inicio del enfrentamiento entre la Iglesia y la República y que, con mucha menos virulencia, siguió dándose a lo largo de todo el bienio. No hemos encontrado, empero, una reacción especial de la jerarquía ante sucesos de tal envergadura. Ciertamente que los prelados protestaron y que singularmente duras en el primer caso fueron las palabras del arzobispo de Burgos, Dr. CASTRO ALONSO y del obispo de Orense, Dr. CERVINO GONZALEZ, y, ante los incendios, las salidas de la pluma de los Dres. GOMA o ALVAREZ MIRANDA, pero la mayoría del episcopado mantuvo una actitud, al menos a nivel público, de discreción y moderación, de acuerdo con la postura de acatamiento al poder constituido seguida desde un principio.

Igualmente moderada sería la reacción de la jerarquía ante uno de los decretos con que se inició la labor legislativa del gobierno provisional y por el que venía a darse fin a uno de los privilegios de la Iglesia católica: el de 22 de mayo de 1931, por el que, en desarrollo de las previsiones del Estatuto Jurídico, se establecía la libertad de creencias y cultos. Salvo el documento que, en nombre de todo el episcopado, suscribió el cardenal SEGURA el 3 de junio, la protesta particular de VIDAL, la pública del Dr. ALVAREZ MIRANDA y alguna alusión aislada en el contexto del tratamiento de otros temas, no hemos podido constatar en los boletines eclesásticos consultados contestación alguna del episcopado ante esta norma.

Aparte de las lógicas y continuas exhortaciones a los fieles en materia religiosa o de pura espiritualidad, de otras cuestiones se ocuparían los obispos: de la actuación del clero, al que aconsejaban seguir cumpliendo como hasta el presente su ministerio sacerdotal y no entrar en absoluto en la liza política (excepción hecha, claro está, del caso de los sacerdotes diputados), de la cuestión social, con un pensamiento, en general, sumamente tradicional, entre el que tan solo destaca la pastoral del Dr. FIJO Y GARAY de 30 de octubre de 1931, en la que, contrariamente a lo que había hecho SEGURA respecto a la misma Iglesia, amonestaba a los fieles para que no evadieran capitales, y de otros temas concretos que, si en principio pueden parecer superfluos, no dejan de reflejar la mentalidad de la época tanto por parte del poder civil como del eclesástico: los numerosos acuerdos municipales encaminados a trasladar monumentos o cambiar nombres dedicados a figuras del santoral en la toponimia ciudadana, acuerdos ante los que en ningún caso la jerarquía guardó silencio.

II. De mayor enjundia, por supuesto, sería su actuación ante el relevante hecho de la futura constitución

para el país, algunos de cuyos preceptos, a nivel de proyecto de la Comisión Jurídica Asesora, no dejaban de ser, por ~~mas~~ moderado que tal proyecto fuera, frontalmente contrarios a la conciencia eclesial de la época, que, en bloque, alzó su voz contra la aconfesionalidad del Estado; en casos privada y suavemente como haría el cardenal VIDAL, en otros públicamente, como el cardenal ILUNDAIN, y en otros, en fin, acompañando a esta publicidad frases de extrema dureza, como fue el caso del obispo de Mallorca Dr. MIRALLES Y SBERT.

Un hecho, sin embargo, vendría en esta ocasión a hacer que fueran escasos los pronunciamientos individuales del episcopado y fue la publicación de un nuevo documento del cardenal SEGURA que igualmente suscribiría en nombre de todo el episcopado y en el que atacaba frontalmente el proyecto constitucional. Con independencia de ello solo tres provincias eclesiales, siguiendo el criterio del cardenal VIDAL, enviarían mensajes a las Cortes constituyentes: la propia de Tarragona, la de Sevilla y, muy escuetamente, la de Burgos; mensajes con los que se intentaba influir en los diputados exponiendo la tradicional doctrina católica sobre los distintos extremos que deberían ser regulados en la futura constitución.

Prelados hubo, en fin, que prefirieron dar publicidad a su pensamiento para formar la conciencia de los fieles y nuevamente aquí se manifiesta la disparidad en sus planteamientos: la dureza de juicios de los obispos de Tui o de Salamanca sobre el proyecto, la exposición tradicionalísima del obispo de Vich, Dr. PERELLO, la comedida y exacta visión del Dr. PLA Y DENIEL o la moderación del obispo de Tortosa, Dr. BILBAO, y, en fin, la exuberante verborrea del Dr. GOMÁ en defensa de una sociedad y de un concepto de poder civil totalmente anclados en ideologías del pasado. Junto a estos escritos la jerarquía,

de acuerdo con los boletines eclesiásticos consultados, prefirió enfocar su pluma a juicios genéricos sobre la situación de España en los que resalta su constatación del tiempo perdido cerca de una auténtica formación religiosa de los fieles, a los que en ocasiones exhortaban a la acción directa en defensa de una constitución acorde con sus creencias (resultado de esta exhortación serían las numerosas peticiones de grupos de católicos llegadas a las Cortes); en casos, unos negros augurios para el porvenir de España y un duro juicio para el poder civil, y en todas las ocasiones, un clamor hacia la fe a mantener, en última instancia, en la providencia.

Solucionado el problema de la remoción del cardenal SEGURA gracias a la actuación cerca del gobierno provisional de la comisión de metropolitanos, el texto final de la Norma Suprema no sería, empero, favorable a los intereses de la Iglesia. Sus artículos 3, 14, 25 a 27, 34, 37, 43 a 45, 48, 49 y 95, contendrían, según destacaría el obispo de Tortosa, principios totalmente contrarios a su doctrina e intereses. Por ello, y con independencia del mensaje de protesta inmediatamente cursado por el Vaticano, no dejaría la jerarquía española de alzar su voz, en casos comedidamente, limitándose a glosar las palabras del papa, en ocasiones llamando a los fieles a la resistencia legal -como haría singularmente el obispo de Vich, apoyando la campaña revisionista iniciada por la derecha- y, en otros, en fin, criticando duramente el contenido de la Constitución y singularmente el de su artículo 26, como sería el caso del Dr. CERVINO y, destacadamente, del Dr. GOMA, o de los obispos de Barcelona, Dr. IRURITA o de Málaga, Dr. GONZALEZ GARCIA.

Todas estas palabras que vendrían a cerrarse con la publicación del documento colectivo de 20 de diciembre de 1931 que, suscrito -en esta ocasión si- por todos los

prelados aunque dirigido en su redacción por el cardenal VIDAL, expondría ante los fieles y ante el país entero, con amargas y comedidas frases, la postura católica, tanto ante la nueva Ley Fundamental como ante la legislación secularizadora hasta la fecha dictada y ratificada por las Cortes, invitando a los creyentes a una actuación más cercana a la Iglesia, tanto por medio de la intensificación de su piedad como a través de la reorganizada Acción Católica, y culminando en graves frases relativas a la persecución vivida por la Iglesia en España y a la esperanza en un futuro de mayor armonía.

III. Punto crucial de la legislación secularizadora del gobierno provisional sería, lógicamente y como muchos autores destacan, el de la enseñanza, cuya reforma se apresuro a iniciar el gobierno provisional mediante el dictado de los oportunos decretos. Entendemos que no otra cosa podía hacer un gobierno provisional en un régimen cuyas Cortes constituyentes aún no habían sido elegidas, pero preciso es aludir, por una parte, al contenido, a todas luces exagerado, de las primeras disposiciones, obligando a la mayoría creyente del país a expresar en forma concreta el deseo de que sus hijos siguieran recibiendo en las aulas públicas la enseñanza de la religión y, por otra, al hecho, indudablemente antifurídico, de los trascendentales -al menos para la época-, acuerdos adoptados, so capa de desarrollo normativo, por simples circulares, como ocurriría en el caso de la disposición que mandaba desterrar todo símbolo religioso de las escuelas oficiales en que hubiera alumnos que no desearan recibir formación religiosa, establecía que la expresión del deseo de los padres respecto a la enseñanza de la religión se hiciera por escrito y determinaba que tal enseñanza se efectuara a primera o última hora del horario lectivo; así como en el de la que

acabaría suprimiendo totalmente la enseñanza de la religión en las escuelas oficiales.

Pese a ello, nuevamente nos encontramos, respecto al primer caso, ante la ausencia de crítica por parte de la jerarquía, que, en el marco de los boletines eclesiásticos consultados y salvo las excepciones de los obispos de Coria y León, se limitó a exhortar a los creyentes para que solicitaran la enseñanza religiosa de sus hijos.

Una figura del episcopado destacaría, no obstante, en el tema de la enseñanza y fue el obispo de Palencia, Dr. PARRADO GARCÍA, que, desde los primeros momentos arremetería no solo contra la anunciada "escuela única", de indudable carácter laico, sino contra toda innovación educativa, como podría ser la coeducación. Este prelado, sin embargo, no reaccionaría ante el más grave hecho producido hasta el momento en la materia, cual era la aludida circular de doce de enero desterrando la enseñanza de la religión de las aulas públicas, tema sobre el que si hablarían, por el contrario, los prelados de Oviedo -con singular clarividencia y amargura-, Tarazona, Barcelona- con extrema dureza- y Huesca.

Es precisamente en el tema de la enseñanza donde nos habrían de constatar los obispos el descuido por parte de una Iglesia, que ni siquiera dejaba leer a los fieles determinada prensa, en la formación de sus hijos y no dejaron de ser las disposiciones de la República un aldobonazo que la hizo aprestarse a la conquista del tiempo perdido, debiendo organizar apresuradamente, mediante las denominadas "Congregaciones de la Doctrina Cristiana", no solo aulas parroquiales en que sacerdotes y catequistas seculares impartieran la enseñanza de los principios religiosos a los alumnos carentes ahora de ella, sino llamando la atención cerca de los fieles para que

colaboraran en la creación de centros escolares que, aun de carácter privado, a tenor de las determinaciones constitucionales, mantuvieran el signo de la confesionalidad, dada la prohibición canónica, sólo dispensable por el respectivo ordinario, que pesaba sobre los católicos de enviar a sus hijos a escuelas laicas.

En las exhortaciones episcopales encaminadas a estos propósitos encontraremos, una vez más, la más amplia gama de posturas, en la mayoría de los casos ancladas en las lamentaciones de la persecución que sufría la Iglesia por parte de masones y comunistas, empeñados en deterrar toda formación religiosa de la sociedad española, mientras que el tema del reparto proporcional en las subvenciones del Estado, materia más concreta a exponer, no sería, empero, prácticamente defendido por la jerarquía, aunque sí a nivel de prensa, tal como haría "El Debate".

Pese a los esfuerzos desplegados por el episcopado en materia de enseñanza religiosa, preciso es constatar, tal como también haría la Sagrada Congregación del Concilio, que el tiempo perdido por la Iglesia respecto a una sólida formación de sus hijos no sería recuperado mediante la nueva organización que creaba ni mediante las exhortaciones para la asistencia de los niños a las catequesis parroquiales. En 1933, y a pesar del endurecimiento general -es de destacar la línea laxa seguida en este como en otros casos por el arzobispo de Valencia Dr. MELO- de la postura eclesiástica respecto a la asistencia de los hijos de católicos a escuelas no confesionales resultante del documento colectivo de 25 de mayo con motivo de la ley de confesiones y congregaciones religiosas, no se había logrado la esperada respuesta por parte de los fieles, en contra de las noticias favorables publicadas en todos los boletines eclesiásticos.

IV. Si no cabe duda que el pensamiento eclesiástico oficial ha evolucionado en materia de enseñanza no puede decirse lo mismo de otra de las controvertidas cuestiones de la legislación secularizadora de la segunda República, cual fue la introducción del matrimonio civil y del divorcio, materias ambas sobre las que la jerarquía sigue manteniendo, respecto a los creyentes, la misma postura que en los años treinta (obispo hubo, como el Dr. PERELLO que llegó a sostener que el divorcio estaba prohibido "aún entre inieles"), en base a ser la institución matrimonial un sacramento establecido por el mismo Fundador de la Iglesia. Si bien no asistamos hoy en día, desde luego, a ver el mismo encono con que la jerarquía se pronunciaría ante el hecho del matrimonio civil (hay que recordar que de él estaban exentos entonces los católicos y que para poder contraerlo preciso era apostatar antes formalmente)

Este encono venía indudablemente propiciado por la forma en que la República legisló en la materia, llegando a negar toda competencia en cuestiones de separación matrimonial entre católicos a los tribunales eclesiásticos. No obstante y una vez más, la acritud no aparecería en todas las palabras del episcopado que, publicando para este tema un documento colectivo monográfico a fin de paliar la diversidad de normas que, con el objeto de que ningún fiel se acogiera a la nueva legislación, sino únicamente, en el caso del matrimonio civil, lo utilizaran como forma subsidiaria y complementaria del verdadero y único matrimonio, se iban dictando por parte de cada obispo para cumplir las directrices vaticanas. Pese a tal documento la jerarquía seguiría pronunciándose individualmente sobre ambas materias, destacando, en esta ocasión, frente a las tremendistas palabras del obispo de Segovia, Dr. PÁREZ PLATERO o del de Orense, Dr. CERVINO GONZÁLEZ -para el que la legislación matrimonialista, lejos de ser un intento de la República para que pudieran armonizarse muchas vidas desgraciadas, no dejaba de ser obra

de "impíos, masones y herejes"-, posturas más suaves como la que, paradójicamente y siempre, claro es, dentro de su, en todos los órdenes, tradicional pensamiento, asumiría para este tema el Dr. GOMA, o, más claramente, el arzobispo de Zaragoza, Dr. DOMANECH, y que revelaban en todo caso la patriarcal concepción de la jerarquía respecto a la situación de la mujer o de la familia -sobre la que el episcopado, preciso es indicarlo, jamás hizo uso, ni en materia de enseñanza, de lo positivamente determinado en el artículo 43 de la Constitución- y su infundado temor a un cambio radical en las costumbres del pueblo español. Temor que, frente a la comprensiva postura mantenida por el documento colectivo redactado por el cardenal VIDAL y propiciada por el arzobispo de Sevilla en el que llegó a contemplarse la posibilidad, sin duda avanzada para la época, de que en los casos de separación, los fieles pudieran recurrir tan sólo a un procedimiento judicial para evitar gastos y duplicidades, llegó a hacer pensar al Dr. GARCÍA MARTÍNEZ, obispo de Calahorra, en la posibilidad de exhortar a los fieles para que, en una acción de fuerza, se negaran a contraer matrimonio civil, postura que, gracias al buen criterio de la mayoría del episcopado, nunca llegaría a mantenerse.

V. Una afrenta era para un ciudadano acostumbrado en todo caso a vivir los momentos esenciales -bautismo, casamiento e inhumación- de su vida bajo el signo de la cruz, que la Iglesia pudiera negarle el descanso en suelo sagrado y era esta una potestad que en los años treinta a ella solo incumbía, pudiendo determinar, en consecuencia, a quien correspondía este privilegio y a quien no. Por ello el empeño secularizador de la República tendría también que ocuparse de esta prerrogativa, dada la necesidad de asegurar el respeto a la libertad de conciencia, y, así, ya en julio de 1931, dictaría el gobierno provisional el oportuno decreto a fin de acabar con la potestad eclesial sobre los

cementerios civiles y el poder decisorio que sobre el entierro de todos los ciudadanos, aún de los niños, tenía.

Otras normas seguirían a esta: el derribo de las tapias de separación de los recintos confesional y civil, la obligación de los municipios de tener cementerio propio, bien mediante su construcción o bien mediante la expropiación del parroquial, o la clausura de los cementerios privados en que venían siendo enterrados los miembros de comunidades religiosas. Entre todas ellas una hubo en extremo impropcedente que habría de herir, lógicamente, la conciencia católica mayoritaria: la que establecía la necesidad de una expresa manifestación escrita de desear tener enterramiento católico.

Todas estas normas e incluso una que hoy no deja de llamar la atención como era la posibilidad de la cremación de los cadáveres, fueron entendidas por la jerarquía como un verdadero atentado contra los intereses eclesiásticos y, más aún, como el laico deseo de hacer desaparecer todo signo que pudiera hacer pensar al hombre en sus postrimerias, no sin tener también en cuenta el atentado a la propiedad que, dada la actuación de muchos ediles municipales, suponía la incautación de camposantos hasta entonces eclesiásticos.

Ante tanta renovación de costumbres seculares no podía permanecer silencioso el episcopado que en este tema, al igual que había ocurrido en materia de enseñanza, volvería a ser especialmente prolijo en hacer oír su voz, pasando a arguir en defensa de la existencia del cementerio católico, a protestar contra el derribo de las tapias de separación, a dictar las oportunas normas a seguir por los párrocos ante los actos de expropiación de las autoridades municipales, a orientar a los religiosos -y singularmente a las religiosas- sobre sus cementerios privados, a defender el derecho a la conducción pública de los entierros católicos, y, en fin, a

instruir y exhortar a los fieles sobre la declaración expresa de voluntad a efectuar sobre el carácter de su entierro. Aquí, como en las restantes cuestiones, se dejaría ver, una vez más, la distinta postura de los obispos, extremista en casos ante la posibilidad de que finalizara la distinción entre cementerio civil y católico, moderada en otros. Siendo tema de tanta trascendencia para la mentalidad católica de la época que destaca el hecho de que el cardenal VIDAL, tan poco proclive, en comparación con sus hermanos en el episcopado, a publicar pastorales y circulares, dedicara una íntegramente a la cuestión de la secularización de cementerios, con un pensamiento que solo puede calificarse de tradicional, si bien no tanto ni con tan duras frases como las escritas, una vez más, por el Dr. GOMA.

Con independencia de los conocidos hechos propiciados por el cardenal SEGURA y de las reiteradas voces de otros miembros del episcopado hasta aquí vistos, bien a favor de soluciones tremendistas, bien propugnando acuerdos conciliadores, creemos que dos figuras de la jerarquía destacan en este primer bienio por su contrapuesta actitud: por un lado el que se vería obligado a ejercer de cabeza de la Iglesia durante la mayor parte de este primer bienio, cardenal VIDAL Y BARRAQUER, y, en sus antípodas, el obispo que vendría, precisamente, a continuar su labor al ser nombrado primero nuevo primado de España y más adelante cardenal de la Iglesia: el obispo de Tarazona y administrador apostólico de Tudela, Dr. Isido GOMA Y TOMAS, cuyo pensamiento en este primer periodo, aunque glosado por su biógrafo GRANADOS, no ha sido, creemos, lo suficientemente destacado en el relieve de su rechazo a toda innovación política en el sentido democrático, a todo reconocimiento de laicidad política y a su idea de la indisoluble unidad del catolicismo con la esencia del ser de España.

Entre la postura de uno y otro prelado hubo muy diversas posturas eclesíásticas ante un régimen que no supo tratar con las necesarias cautelas el llamado "problema religioso" y que, aun indudablemente necesitado de abordar la transformación social, empleo equivocadamente el sistema de ofrecer a la Iglesia hechos consumados desde el poder político sin una verdadera actitud de pacto. Progresistas, para su tiempo, unas, enormemente retardatarias otras en cuanto ancladas desde el punto de vista político en coordenadas realmente ultramontanas y, desde el religioso, en unos principios demasiado superficiales para lo que hubiera precisado una verdadera renovación católica en la época: excesivas llamadas a la actuación "viril" de unos hombres católicos que poco se ocupaban, al parecer, de la política religiosa y de unas mujeres que, si católicas practicantes en su mayoría, pocas tablas de actuación política tendrían; con un reconocimiento de la desastrosa situación del catolicismo en España, pero sin dejar de intentar orquestar por todos los medios las manifestaciones públicas de la religiosidad que, según las crónicas eclesíásticas, sería en este primer bienio más brillantes y estarían más concurridas que nunca, y defendiendo una religiosidad anclada en la idea de que sin ella no había ser humano íntegro y sin la católica no existía salvación posible ni para el hombre ni para la sociedad. En suma, y salvo raras excepciones, por derroteros de defensa contra ataques, de prácticas piadosas con poca profundidad, de control en modas y en lecturas y en excesivas llamadas de atención sobre los "intereses" de la Iglesia, sobre la seguridad, el orden social, la paz temporal..., mezclando preocupaciones primarias con aspiraciones esenciales en un conjunto que poco podía propiciar una verdadera transformación del catolicismo patrio a través del espíritu, en forma inteligente, evangélica y esperanzada.

Las palabras del episcopado, en definitiva, crearon en la conciencia del ciudadano católico la idea de la

necesidad de alzarse, aun por las vías de resistencia legal, contra un régimen empeñado en perseguir sus creencias y en ir, como la jerarquía tantas y tantas veces repetiría, contra "los derechos de la Iglesia", dando lugar a esa confusión que existió entre la necesaria mermas de privilegios y el ataque a los sentimientos y creencias religiosas. Tal conciencia, cierto es, tenía, como el mismo pensamiento de la jerarquía, sus variaciones: desde el integrista más recalcitrante, que llegaría a dizarse contra el nuncio TEDESCHINI y contra el mismo cardenal VIDAL, a las posturas moderadas propugnadas por los hombres de la democracia cristiana.

Las continuas manifestaciones episcopales, creemos que hasta ahora no suficientemente analizadas, acabarían creando un estado de opinión, más proclive a acciones de resistencia que de creación de alternativas concretas. Contra un régimen en su día votado por gran número de católicos y parte del clero, lo que tendría la consecuencia, en forma inmediata, del vuelco político de finales de 1933 y, a más largo plazo, del cruento enfrentamiento de 1936.

APPENDICES

I

CAPÍTULO I

LA IGLESIA ANTE LA REPÚBLICA

- 1.- "Circular de Su Emcia. Revdma. sobre rogativas por las necesidades de la Iglesia y de la Patria.

15 de abril de 1931, *BOE de Toledo*, año 37, 16 de abril de 1931, núm. 4, págs. 131-133.

- 2.- "Circular núm. 103. A nuestro amadísimo clero."

15 de abril de 1931, *BOE de Valencia*, 15 de abril de 1931, núm. 2121, págs. 122-124.

- 3.- Los más relevantes primeros decretos del Gobierno provisional: Nombramiento del Presidente del Gobierno provisional. Estatuto Jurídico del Gobierno. Amnistía e Indulto

14 y 15 de abril de 1931, *Gaceta de Madrid*, núm. 105,
15 de abril de 1931, págs. 194-195; núm. 106, 16 de
abril de 1931, pág. 199.

- 4.- "Iglesia y Estado.- Una declaración de la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos".

"*El Debate*", 22 de abril de 1931.

"*El Sol*", 23 de abril de 1931.

- 5.- "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos".

S. I., *BOE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 174-175.

- 6.- "Carta Pastoral de su Emcia. Rvdma sobre los deberes de los católicos en la hora actual."

1 de mayo de 1931, *BOE de Toledo*, año 87, 2 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 137-145.

7.- "Circular. A nuestros amados diocesanos."

4 de mayo de 1931, *BDE de Tarazona*, año 67, 5 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 197-202.

8.- "Carta pastoral sobre los deberes de la hora presente."

10 de mayo de 1931, *BDE de Tarazona y Tudela*, año 67, 15 de mayo de 1931, núm. 683, págs. 345-380.

9.- "Se dan facilidades al cardenal Segura para que pase la frontera".

"*El Sol*", 14 de mayo de 1931.

10.- Declaración colectiva del episcopado español.

3 de mayo de 1931, *BDE de Toledo*, año 87, 16 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 153-155.

Recogido en IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, págs. 130-133.

11.- "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (Nota del gobierno).

S.f. *BDE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 185-186.

12.- "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (Carta del obispo auxiliar de Toledo de 17 de junio de 1931 al presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora).

S.f. *BDE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 189-191.

- 13.- "Expulsión de España de Su Emiencia Reverendísima y exposición de hechos". (Carta del cardenal Segura de 15 de junio de 1931 al presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora).

S.f. *BOE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 181-183.

- 14.- "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (Carta del presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora, de 17 de junio de 1931 al cardenal Segura).

S.f. *BOE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 190-193.

- 15.- "Al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno provisional".

25 de junio de 1931. *BOE de Orense*, año 98, 27 de junio de 1931, núm. 13, págs. 216-218.

- 16.- "Don Miguel Maura funda el partido conservador de la Republica.- Texto taquigráfico del discurso pronunciado anteayer por el ex-ministro de la Gobernación".

"*El Sol*", 12 de enero de 1931.

- 17.- "Los Sucesos del 11 y 12 de mayo.- Los Días Sacrilegos".

Separata y *BOE de Málaga*, año 64, 15 de junio de 1931, núm. 7, págs. 196-203.

- 18.- "Las iglesias saqueadas"

BOE de Málaga, año 64, 15 de julio de 1931, núm. 8, págs. 231-232.

- 19.- "Joyas artísticas destruidas o robadas en los sucesos del 11 y 12 de Mayo".

S.f. *BOE de Málaga*, año 64, 15 de agosto de 1931, núm. 9, págs. 362-364.

- 20.- "Comentario.- Lo religioso, lo irreligioso y lo antirreligioso".

"El Sol", 4 de junio de 1931.

- 21.- "Así cayó Alfonso XIII", Miguel MAURA.

Barcelona, 1960, págs. 293-307.

- 22.- "Acción católica diocesana. Por la reintegración del Excmo. Prelado a su Diócesis".

Diversas fechas, *BOE de Vitoria*, año 67, 1 de agosto de 1931, págs. 543-551.

- 23.- "La promesa de España.- Comunismo, fascismo, reacción clerical y problema agrícola".

"El Sol", 14 de mayo de 1931.

- 24.- "Carta Pastoral de Su Emcia. Rvma. sobre los deberes del cargo pastoral."

4 de julio de 1931, *BOE de Toledo*, año 87, 8 de julio de 1931, núm. 13, págs. 221-229.

- 25.- "Carta de Su Emcia. Rvdma. al Sr. Presidente del Gobierno provisional de la República."

20 de julio de 1931, *BOE de Toledo*, año 87, 23 de julio de 1931, núm. 14, págs. 237-242.

- 26.- Circular núm. VI del cardenal Segura y anexos.

20 de julio de 1931, *Església i Estat durant la segona República espanyola, 1931/1936*, págs. 155-161.

- 27.-Decretos sobre el Tesoro artistico nacional y sobre conservación de obras artisticas.

22 y 27 de mayo de 1931, *Gaceta de Madrid*, núm. 146, 26 de mayo de 1931, págs. 949-950 y núm. 148, 28 de mayo de 1931, pág. 976.

- 28.- "Cristianismo monárquico y monarquismo cristiano".

"*El Sol*", 29 de mayo de 1931.

- 29.- Carta Pastoral del Episcopado sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a los catolicos.

25 de julio de 1931, *BOE de Tarragona*, año 42, 17 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 326-344.

- 30.- "La retención del Sr. Vicario general y de un documento eclesiástico en la frontera de Irún."

S.f. *BOE de Vitoria*, año 57, 1 de septiembre de 1931, núm. 19, págs. 609-611.

- 31.- "Carta abierta de la Junta Provincial de Acción Católica de Guipúzcoa al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

15 de agosto de 1931, *BOE de Vitoria*, año 57, 1 de septiembre de 1931, núm. 19, págs. 606-609.

- 32.- "El nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, entregó ayer al jefe del Gobierno la contestación del Vaticano"

"*El Sol*", 1 de octubre de 1931.

33.- Carta del cardenal Segura a "El Siglo Futuro".

11 de julio de 1931, *Església i Estat durant la segona República espanyola*, III, pág. 938.

34.- "Una información sobre la provision de la sede de Toledo".

"*El Sol*", 25 de agosto de 1931.

35.- "Circular núm. 36. Cumplimiento de la precedente Enciclica.

1 de noviembre de 1931, *BOE de Coria*, año 66, 15 de noviembre de 1931, núm. 22, págs. 345-350.

36.- Carta de Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, al cardenal Vidal y Barraquer.

26 de diciembre de 1931, *Església i Estat durant la segona República espanyola*, II, págs. 457-459.

36.1.- Notas para la organización profesional de los obreros católicos.

S.f., *Església i Estat durant la segona República espanyola*, II, págs. 460-462.

37.- "Circular núm. 94. Ad clerum sive saecularem sive regularem circa usum vestis talaris."

26 de abril de 1931, *BOE de Madrid-Alcalá*, año 46, 1 de mayo de 1931, núm. 1534, págs. 176-177.

38.- "Pastoralia Monita ad Venerabilem clerum saecularem utrisque Dioecesis, temporum circumstantiis accommodata."

23 de julio de 1931, *BOE de Tarazona y Tudela*, año 69, 31 de julio de 1931, núm. 688, págs. 555-567.

1. - "Circular de Su Emcia. Revdms. sobre rogativas por las necesidades de la Iglesia y de la Patria.

15 de abril de 1931. *BOE de Toledo*, año 37, 16 de abril de 1931, núm. 4, págs. 131-133.

EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO
AL CLERO Y FIELES DEL ARZOBISPADO

Práctica ha sido constante en la Iglesia de Dios, desde sus mismos comienzos, la de implorar con oraciones especiales la misericordia divina en las especiales necesidades que han afligido a los pueblos cristianos.

Y a la oración fervorosa y constante que se hacía, no sólo en los templos y en el recinto de los hogares santificados por la bendición de Dios, sino también en las calles y plazas públicas, se unía la penitencia austera, tantas veces recomendada en los libros santos.

Ya en la oración que hacía el Rey Sabio en la solemne dedicación del Templo de Jerusalén se expresaba en estos términos: «Si orando en este lugar, hicieren penitencia dando gloria a tu santo nombre, y en su aflicción se convirtieren de sus culpas, atiéndelos, Señor, desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos y de Israel, tu pueblo.» (III Reg. VIII 35, 36.)

¿Qué terribles resuenan aquellas palabras de nuestro Divino Maestro pronunciadas con motivo de dos desgracias que habían acaecido recientemente: «Si vosotros no hiciéreis penitencia, todos pereceréis igualmente!» (Luc. XIII, 5.)

En Nuestras últimas Alocuciones pastorales pronunciadas en el Santo Templo Primado, os anunciábamos con toda claridad la verdadera causa principal de las penalidades que oprimen a los pueblos.

En las presentes gravísimas circunstancias, que tan honda y justa preocupación inspiran, ha de ser nuestro primer recurso el de la oración y el de la penitencia. Se necesitan muchas manos puras levantadas al cielo, de donde ciertamente nos ha de venir el auxilio y la gracia en tiempo oportuno.

Venimos, pues, en disponer que, a partir del día en que se reciba esta Circular, en todas las Iglesias de la Archidiócesis y en las casas todas de comunidades religiosas de la misma, se hagan las siguientes rogativas durante todo el tiempo que las necesidades especiales perduren:

1) En los domingos y días festivos se recitarán las letanias de los Santos, bien sea después de la Misa parroquial, bien en la función de la tarde, según pareciere más oportuno a los Rectores de las Iglesias.

2) Todos los domingos y días festivos, en el tiempo que se estime más conveniente, se celebrará con Exposición solemne de Su Divina Majestad un acto eucarístico, durante el cual se rezará la fórmula de desagravios que se contiene en el Ritual de la Adoración Nocturna y que se inserta a continuación en el presente número del BOLETÍN ECLESIÁSTICO.

3) Los sacerdotes continuarán aplicando por esta intención la colecta ya imperada con motivo de la Santa Visita «ad postulandam gratiam Spiritus Sancti».

4) Exhortamos encarecidamente a las Religiosas a que, según en cada Comunidad, con el Consejo de sus confesores, pareciera mejor, ofrezcan oraciones y penitencias especiales para aplacar la justicia de Dios e impetrar su clemencia sobre nuestra Patria.

5) Finalmente, siéndonos muy conocida la piedad verdaderamente ejemplar de la mayor parte de nuestros amadísimos Hijos, les rogamos, «per viscera misericordiae Dei nostri», que se abstengan durante este tiempo de oración y de penitencia por los pecados de nuestro pueblo, de las profanidades y diversiones mundanas, que al menos tanto enfrían las almas cuando no las precipitan en el pecado.

Si to'os los que se precian del nombre de católicos se sumaren a esta efecacísimá cruzada de oraciones y de penitencias, bien puede asegurarse que no tardará el Señor en mostrarnos «el verdadero camino por donde debemos de andar» (III Reg. VIII, 36) para llegar a la tierra prometida de nuestra dicha y felicidad eterna.

Toledo, 15 de Abril de 1931.

† EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO

(Esta Circular será leída al pueblo según costumbre.)

ACTO DE DESAGRAVIOS

Y. Por nuestros pecados, por los de nuestros padres, hermanos y amigos, por los del mundo entero.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por las infidelidades y sacrilegios, por los odios y rencores.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por las blasfemias, por la profanación de los días santos.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por las impurezas y escándalos.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por los hurtos e injusticias, por las debilidades y respetos humanos.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por la desobediencia a la Santa Iglesia, por la violación del ayuno.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por los crímenes de los esposos, por las negligencias de los padres, por las faltas de los hijos.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por los atentados cometidos contra el Romano Pontífice.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por las persecuciones levantadas contra los Obispos, sacerdotes, religiosos y sagradas vírgenes.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por los insultos hechos a vuestras imágenes, la profanación de los templos, el abuso de los Sacramentos y los ultrajes al augusto Tabernáculo.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por los crímenes de la prensa impía y blasfema, por las burrendas maquinaciones de tenebrosas sectas.

R. Perdón, Señor, perdón.

Y. Por los justos que vacilan, por los pecadores que resisten a la gracia y por todos los que sufren.

R. Piedad, Señor, piedad.

Y. Perdón, Señor, y piedad por el más necesitado de vuestra gracia; que la luz de vuestros divinos ojos no se aparte jamás de nosotros; encadenad a la puerta del Tabernáculo nuestros inconstantes corazones; hacedles allí sentir los incendios del amor divino, y a vista de las propias ingratitudes y rebeldías, que se deshagan de pena, que floren lágrimas de sangre, que vivan muriendo de amor.

Y. Amén.

2. - "Circular núm. 103. A nuestro amadísimo clero."

15 de abril de 1931. *RDE de Valencia*, 15 de abril de 1931, núm. 2121, págs. 122-124.

El sagrado carácter de nuestro ministerio pastoral nos obliga a trabajar con vigilante solicitud en el servicio de Dios Nuestro Señor y en el mayor provecho de las almas, por cuya salvación eterna ejercemos nuestro sacerdocio.

Las circunstancias actuales en que se encuentra nuestra Patria por el advenimiento de un nuevo régimen de gobierno, requieren sumo tacto y gran prudencia y discreción por parte nuestra, a fin de evitar futuras complicaciones y de contribuir eficazmente al logro de los inapreciables bienes que consigo lleva la paz de los pueblos.

Inspirada en aquella consigna de nuestro Divino Maestro tan repetida en los Santos Evangelios: «Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César», la Iglesia, nuestra Santa Madre, con fidelidad inalterable, a través de los espacios y del tiempo, ha venido repitiendo constantemente a sus Hijos una misma y constante enseñanza: la de una sumisión fiel a los poderes constituidos y la de una sincera obediencia a sus disposiciones, mientras no estuvieren en oposición manifiesta con la ley de Dios Nuestro Señor.

A la luz de esta doctrina, de todos tan conocida, bien claros aparecen hoy nuestros deberes como Hijos de la Iglesia y como ciudadanos del Estado español: no son otros, en este punto, sino acatar sinceramente la nueva forma de gobierno que viene a regir los destinos de nuestra Patria, respetar las autoridades constituidas o que en lo sucesivo se constituyeren, y prestar una leal cooperación a sus disposiciones, a fin de que el esfuerzo de todos vaya labrando la paz de nuestra amadísima España, y con ella la prosperidad y fomento de toda su vida nacional.

La detenida meditación y estudio de estas verdades, que han de ser regla de nuestra conducta, harán que nuestra actuación sea siempre recta y acertada, y exenta de todo apasionamiento o particular afecto que para nada debe mezclarse en la observancia de nuestros deberes.

con Dios Nuestro Señor y con el bien espiritual de las almas que Él nos ha encomendado. Sobre todo, la ferviente oración nuestra, la de nuestras observantísimas Religiosas consagradas al Señor y la de todas las almas buenas, dirigida a nuestro Padre de los Cielos para que asista con extraordinarias luces a quienes han tomado a su cargo el gobierno de la nación; y la plegaria filial a la Santísima Virgen para que nos otorgue su maternal protección, serán para todos prenda y garantía segurísima de acierto en las contingencias del presente y en las que puedan ofrecerse en lo porvenir.

Para facilitar a nuestro amadísimo Clero la guía de nuestro paternal consejo, venimos en disponer:

1.^o Que en lo relativo a los voltreos de campanas y la colocación de banderas del nuevo régimen, se sigan los usos y costumbres que hasta ahora han venido rigiendo para los actos oficiales.

2.^o Que en la celebración de la Santa Misa se suprima la Colecta *El funeral*.

3.^o Encarecemos lo tantas veces recomendado de que la predicación sagrada lo sea en el fondo y en la forma, dedicada a exponer las verdades de salvación e inspirada en las Santas Escrituras y en las doctrinas de los Santos Padres, evitando cuidadosamente descender a complicaciones de orden político. Debemos dar ejemplo de hermanar la fortaleza en la defensa de las verdades de nuestra santa fe con la mansedumbre en todo lo que pueda referirse al orden temporal.

Valencia, 15 de abril de 1931.

3. - Los más relevantes primeros decretos del Gobierno provisional: **Nombramiento del Presidente del gobierno provisional. Estatuto Jurídico del Gobierno. Amnistía e Indulto.**

14 y 15 de abril de 1931, *Gaceta de Madrid*, núm. 105, 15 de abril de 1931, págs. 194-195; núm. 106, 16 de abril de 1931, pág. 199.

Gaceta de Madrid, núm. 105, 15 de abril de 1931, págs. 194-195.

DECRETO

El Gobierno provisional de la República ha tomado el Poder sin transición y sin resistencia ni oposición protocolaria alguna; es el pueblo quien le ha elevado a la posición en que se halla, y es él quien en toda España le rinde acatamiento e inviste de autoridad. En su virtud, el Presidente del Gobierno provisional de la República, asume desde este momento la jefatura del Estado con el asentimiento expreso de las fuerzas políticas triunfantes y de la voluntad popular concededora, antes de emitir su voto en las urnas, de la composición del Gobierno provisional.

Interpretando el deseo inequívoco de la Nación, el Comité de las fuerzas políticas coaligadas para la instauración del nuevo régimen, designa a D. Niceto Alcalá Zamora y Torres para el cargo de Presidente del Gobierno provisional de la República.

Madrid, catorce de abril de mil novecientos treinta y uno.

Por el Comité, Alejandro Lerroux, Fernando de los Ríos, Manuel Azaña, Santiago Casares Quiroga, Miguel Maura, Alvaro de Albornoz, Francisco Largo Caballero.

DECRETO

El Gobierno provisional de la República, al recibir sus poderes de la voluntad nacional, cumple con un imperioso deber político al afirmar ante España que la conjunción representada por este Gobierno no responde a la mera coincidencia negativa de libertar a nuestra patria de la vieja estructura ahogada del régimen monárquico, sino a la positiva convergencia de afirmar la necesidad de establecer como base de la organización del Estado un plexo de normas de justicia necesitadas y anheladas por el país.

El Gobierno provisional, por su carácter de transitorio de órgano supremo, mediante el cual ha de ejercer las funciones soberanas del Estado, acepta la alta y delicada misión de establecerse como Gobierno de plenos poderes. No ha de formular una carta de derechos ciudadanos, cuya fijación de principios y reglamentación concreta corresponde a la función soberana y creadora de la Asamblea Constituyente; mas como la situación de "pleno poder" no ha de entrañar ejercicio arbitrario en las actividades del Gobierno, afirma solemnemente, con autoridad a toda resolución particular y seguro de interpretar lo que demanda la dignidad del Estado y el ciudadano, que somete su actuación a normas jurídicas, las cuales, al condicionar su actividad, habrán de servir para que España y los órganos de autoridad puedan conocer, así los principios directivos en que han de inspirarse los decretos, cuanto las limitaciones que el Gobierno provisional se impone.

En virtud de las razones antedichas, el Gobierno declara:

19. Dado el origen democrático de su poder y en razón del responsabilismo en que deben averse los órganos del Estado, someterá su actuación colegiada e individual al discernimiento y sanción de las Cortes Constituyentes -órgano supremo y directo de la voluntad nacional-, llegada la hora de declinar ante ella sus poderes.

20. Para responder a los justos e insatisfechos anhelos de España, el Gobierno provisional adopta como norma depuradora de la estructura del Estado someter inmediatamente, en defensa del interés público, a juicio de responsabilidad los actos de gestión y autoridad pendientes de examen al ser disuelto el Parlamento en 1923, así como los ulteriores, y abrir expediente de revisión en los organismos oficiales, civiles y militares, a fin de que no resulte consagrada la prevaricación ni acatada la arbitrariedad, habitual en el régimen que termina.

39. El Gobierno provisional hace pública su decisión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos sin que el Estado, en momento alguno, pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas.

40. El Gobierno provisional orientará su actividad, no sólo en el acatamiento de la libertad personal y cuanto ha constituido en nuestro régimen constitucional el estatuto de los derechos ciudadanos, sino que aspira a ensancharlos, adoptando garantías de amparo para aquellos derechos, y reconociendo como uno de los principios de la moderna dogmática jurídica el de la personalidad sindical y corporativa, base del nuevo derecho social.

50. El Gobierno provisional declara que la propiedad privada quede garantida por la ley; en consecuencia, no podrá ser expropiada, sino por causa de utilidad pública y previa la indemnización correspondiente. Mas este Gobierno, sensible al abandono absoluto en que ha vivido la inmensa masa campesina española, al desinterés de que ha sido objeto la economía agraria del país, y a la incongruencia del derecho que la ordena con los principios que inspiran y deben inspirar las legislaciones actuales, adopta como norma de su actuación el reconocimiento de que el derecho agrario debe responder a la función social de la tierra.

60. El Gobierno provisional, a virtud de las razones que justifican la plenitud de su poder, incurriría en verdadero delito si abandonase la República naciente a quienes desde fuertes posiciones seculares y prevalidos de sus medios, pueden dificultar su consolidación. En consecuencia, el Gobierno provisional podrá someter temporalmente los derechos del párrafo cuarto a un régimen de fiscalización gubernativa, de cuyo uso dará asimismo cuenta circunstanciada a las Cortes Constituyentes.

NICETO ALCALA-ZAMADRA, Presidente del Gobierno provisional; ALEJANDRO LERROUX, Ministro de Estado; FERNANDO DE LOS RÍOS, Ministro de Justicia; MANUEL AZARA, Ministro de la Guerra; SANTIAGO CASARES QUIROGA, Ministro de Marina; MIGUEL MAURA, Ministro de la Gobernación; ALVARO DE ALBORNOS, Ministro de Fomento; FRANCISCO LARGO CABALLERO, Ministro de Trabajo.

DECRETO

El Gobierno de la República Española, teniendo en cuenta que los delitos políticos, sociales y de imprenta, responden generalmente a un sentimiento de elevada idealidad; que los hechos más recientes de ese orden han sido impulsados por el amor a la Libertad y a la Patria, y además, legitimados por el voto del pueblo, en su deseo de contribuir al restablecimiento y afirmación de la paz pública detenta, como primera medida de su actuación, lo siguiente:

Artículo 18. Se concede la más amplia amnistía de todos los delitos políticos, sociales y de imprenta, sea cual fuere el estado en que se encuentre el proceso, incluso los ya fallados definitivamente, y la jurisdicción a que estuvieren sometidos.

Se exceptúan únicamente los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos y los de injuria y calumnia a particular perseguidos en virtud de querrela de éstas.

Artículo 28. Por los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina se dictarán las disposiciones aclaratorias mediante las cuales se resuelvan las dudas que surjan y el alcance de la amnistía.

Dado en Madrid a catorce de Abril de mil novecientos treinta y uno.

El Presidente del Gobierno provisional de la República; NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.

Gaceta de Madrid, núm. 106, 16 de abril de 1931, pág. 199.

DECRETO

Como Presidente del Gobierno provisional de la República, de acuerdo con el mismo y en armonía con lo anunciado en el Decreto de amnistía publicado en la GACETA de ayer,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 18. Se concede indulto total a los condenados a penas correccionales y a los que sufriendo penas afflictivas les quedara por cumplir menos de cuatro años.

Artículo 22. Se concede indulto de la mitad de la pena que aún les quedara por cumplir a los reclusos no comprendidos en el artículo anterior.

Artículo 38. La gracia concedida en los artículos anteriores queda sometida a reglas análogas a la condena condicional y el reo perderá el beneficio si volviera a delinquir en los siguientes plazos:

Un año para los condenados a arresto mayor; tres años para los que lo hayan sido a prisión o presidio correccional, y seis para los que lo hayan sido a pena afflictiva.

En todo caso, para gozar del beneficio será condición indispensable que si el indultado no se hallare por cualquier causa cumpliendo condena, comparezca en el plazo de un mes ante la Autoridad penitenciaria correspondiente para legalizar su situación y comunicar su residencia.

Artículo 42. Se concede por ministerio de la Ley el beneficio de la libertad provisional a los procesados contra los cuales la petición acusatoria formulada o presunta por apreciación discrecional del Juez durante el sumario no fuere de pena afflictiva.

Para gozar de este beneficio, si el procesado no se hallara en prisión deberán presentarse en el plazo de quince días ante el Juez competente, comunicando su residencia y compareciendo sucesivamente en las fechas que aquél determine.

Artículo 52. Los Ministerios de Justicia, Guerra y Marina dictarán las disposiciones complementarias y aclaratorias para la ejecución del presente Decreto.

Dado en Madrid, a catorce de Abril de mil novecientos treinta y uno.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.

4.- Iglesia y Estado.- Una declaración de la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos.

"El Debate", 22 de abril de 1931.

"El Sol", 23 de abril de 1931.

"Grave preocupación en los días presentes es la de las relaciones que en la nueva forma de gobierno puedan mantener la Iglesia y el Estado. Frecuentemente se escuchan augurios de persecución y temores de intransigencia; pero quien contemple la situación con serenidad pronto advertirá que las palabras alarmantes salen de labios apasiaoandos o asustadizos, mientras que las autoridades de la Iglesia y del Estado se producen con mesura y prudencia dignas de aplauso.

El Gobierno, aun apuntando la tendencia a la separación de la Iglesia y el Estado - como era de esperar -, proclama y practica normas de respeto a la conciencia de los ciudadanos. Por otra parte, algunas cartas pastorales y algunas manifestaciones de Cabildos catedrales advierten que los elementos eclesiásticos reciben al nuevo Poder con el respeto que merece por la limpieza de su origen, debido a una manifestación popular y jurídica, y no a una imposición violenta.

Es de suponer que por tal cauce siga desarrollandose la actividad de las dos potestades. Sin embargo, la Sociedad de Estudios Políticos, Sociales y Económicos, que se ha mostrado siempre atenta a los grandes problemas nacionales y ha procurado contribuir con libros y declaraciones a su sereno examen, cree oportuno hacer hoy una manifestación o, más propiamente, un ruego.

La prudencia y la experiencia de los señores prelados y de todas las entidades y personalidades religiosas comprenderán sobradamente que no hay ningún motivo para mostrar antipatías ni prevenciones al Gobierno de la República, y antes le prestarán - bien podría decirse le seguirán prestando - aquella asistencia moral indispensable para el fructífero

ejercicio de la autoridad temporal. Es ya desacreditada patraña el poner a la Iglesia católica frente a la República, como si su ministerio inmortal hubiese de estar adscrito a unas u otras fórmulas políticas. Los católicos discretos saben que en cualesquiera regímenes se puede servir a Dios y practicar la moral cristiana. Unicamente los poco sensatos o los que encubren apetitos ínfimos con protestas de sinceridad religiosa pueden mantener orientaciones alarmistas presentando la República como enemiga sistemática de la conciencia católica. Mas como importa que se aminoren de día en día el sentir poco culto que atribuye a cualquier orden republicano un criterio demagógico nuestro ruego respetuoso a las autoridades de la Iglesia consiste en que multipliquen sus actos de explícita asistencia al Poder temporal y estimulen a los fieles a colaborar por tal manera a la tranquilidad actual de nuestra patria, que sin hipérbole, puede calificarse de excepcional, pues no será fácil hallar otro ejemplo histórico de la caída de instituciones seculares con menos trastornos y con menos inquietudes.

Al Gobierno republicano hemos de dirigirle la suplica correlativa. Nada hay que temer hoy de los hombres que lo constituyen: de unos, porque claramente han proclamado su fe católica, y de los que no la tienen, porque la delicadeza de sus sentimientos, lo elevado de su cultura, la clara visión que muestran de los problemas españoles son prendas de segura justicia en la materia. La labor que a nuestro entender les incumbe es encauzar el juicio de los elementos extremistas, que nunca faltan, y hacerles ver que el respeto a la libertad de la conciencia, fundamental en la civilización contemporánea, no puede ser nunca transformado en negación ni en persecución del derecho de nadie. España tiene una sensibilidad muy aguda en materias religiosas. Recibirá con respeto una política de libertad perfectamente defendible y justificable. Pero si adquiriese temor nacional de que puedan ser menoscabadas y ofendidas creencias que integran uno de los grandes patrimonios morales de la raza, la República se hallaría falta de un asiento que le es indispensable y las consecuencias que ello tendría serían fatales para el éxito de una obra que hoy no debe ser partidista sino nacional.

Repetimos que estas líneas no están inspiradas por desconfianza alguna hacia las autoridades de uno y otro orden, pues por los hechos realizados

en los contados días de vida oficial republicana, lejos de haber motivos para la inquietuda, abundan para la serenidad. Nuestro deseo es estimular a las dos potestades para que, perseverando en la conducta mostrada hasta ahora y acentuándola en lo posible, contribuyan a dar a todos los españoles la sensación de libertad y de justicia que es indispensable para mantener el equilibrio espiritual e impidan de tal modo que los incomprensivos, los intransigentes y los egoístas puedan hacer desde uno y otro campo la labor de desconcierto a que ellos suelen ser aficionados pero que repugna el sentido general del país y condenaría severamente la Historia. - Madrid, 21 de abril de 1931. - Angel Ossorio, Genaro Poza, Luis de Onís, José Ramón Castro, Blas Vives, Juan Antonio Bravo, José María Ruiz Manent."

5. - S. f. "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos".

ACE de Toledo, año 37, 25 de junio de 1902, núm. 12, págs. 174-175.

La actividad apostólica del Cardenal Primado no podía pasar inadvertida a ciertos periódicos que tienen por bandera la irreligión. Alguno de ellos, reconociendo las virtudes del Cardenal Segura, declaraba, sin embargo, que «no le perlería de vista».

Atravesó la campaña cuando nuestro Prelado, como Director pontificio de la Acción Católica, recordó las Normas que la Santa Sede tiene dadas a los eclesiásticos españoles, llegándose a censurar que recomendase elegir para los cargos públicos «a los más dignos».

Complicóse luego en maniobras políticas, y mientras no faltaron quienes le presentaron como causante de la caída del General Primo de Rivera, otros le acusaron después de conspirar contra ciertos ministros y hasta de preparar una nueva dictadura, suponiéndole de acuerdo con políticos a quienes nunca había saludado; y todo ello sin más prueba que un «se dice» o atribuyendo el origen de las calumniosas noticias al consabido «personaje eclesiástico muy enterado».

Atravesó más la campaña al proclamarse la República. Ya no se reconocían al Sr. Cardenal aquellas prendas que antes se admiraban o, por lo menos, se respetaban. Cada día se inventaba una calumnia o se lanzaba contra él una grosera injuria. Entre varios periódicos había un verdadero pugilato. Periodista hubo que, como le reprochaban el haber publicado una información falsa, respondió tranquilamente: «El Director me envió a Toledo para traer algo contra el Cardenal, y no era cosa de venir con las manos vacías».

A los pocos días de proclamada la República ya se pedía el destierro del Sr. Cardenal. Para mejor conseguirlo se inventó una frase estúpida que se decía pronunciada por el Sr. Cardenal en una plática en la Catedral. El propio Sr. Ministro de Justicia acogió el rumor y mandó abrir una información oficial, cuyo resultado expresó el Sr. Ministro con estas palabras: «Los testimonios coinciden en afirmar que las palabras atribuidas al Cardenal Primado, no fueron dichas por él».

Mas a continuación añadió: «Pero existen *algunos* testimonios que afirman que el Cardenal Primado tuvo expresiones que *podieron* dar motivo a que se creyera había un propósito político que subyugaba su *discrepancia* con el régimen actual».

Era fácil averiguar y aquilatar lo que dijo el Sr. Cardenal, que, en reuniones eclesiales, nada tenía que ver con la forma de Gobierno. Más de cuatrocientas personas habían asistido a la plática. «Pero el Gobierno, declaró el Ministro, no tiene por qué entrar en mayores esclarecimientos». Y con este motivo se envió al Sr. Nuncio una nota que comenzaba con estas palabras: «Al Gobierno han llegado noticias contradictorias sobre palabras pronunciadas por el Cardenal Primado...»

Pero además, en aquella plática íntima y familiar el Sr. Cardenal leyó una carta de una persona que ofrecía a Dios su vida en holocausto de la paz espiritual de España.

Hubo personas de tan escasa perspicacia, que creyeron que aquella carta era... de D. Alfonso XIII. De suponer es que no lo creyese así el Gobierno; pero cierto es que el Ministro de Justicia dijo a los periodistas: «En la información se insiste en que hubo lectura de una carta cuya firma no se leyó.»

6. - "Carta Pastoral de su Emcia. Rvdma sobre los deberes de los católicos en la hora actual."

1 de mayo de 1931, *BOE de Toledo*, año 87, 2 de mayo de 1931, núm. 9, págs. 137-145,

VENERABLES HERMANOS Y MUY AMADOS HIJOS: Acontecimientos que todos conoceis han creado un nuevo estado de cosas en nuestra Patria que impone a todos los católicos gravísimos deberes.

Sabemos que en estos momentos difíciles esperais de Nos orientaciones y normas que os señalen claramente el camino de vuestro deber. Así Nos lo habeis manifestado muchos y aun, a veces, con impaciencia justificada por la gravedad de la situación, pero que Nos no podíamos compartir, porque en momentos tan críticos como los presentes, era menester, más que nunca, orar y meditar, ponderar tiempos y circunstancias y dar lugar a que, serenados los ánimos, la prudencia y la reflexión aconsejasen lo más oportuno.

Por eso hemos guardado silencio y sufrido calladamente insinuaciones y aun groseras calumnias sin apartarnos de la línea de conducta que Nos habíamos trazado, poniendo nuestra confianza en Dios que, conocedor de la rectitud de Nuestras intenciones y del amor que sentimos hacia la Iglesia y hacia nuestra Patria, será siempre Nuestro mejor escudo y Nuestra más firme defensa.

Hoy ha llegado ya la sazón de hablar, y lo haremos con sinceridad absoluta y con la claridad necesaria para que cuantos militais en las legiones de paz de la Iglesia católica tengais normas seguras que os indiquen en estos momentos de oscuridad y confusión el camino que habeis de seguir.

UNA MIRADA AL PASADO

Las conmociones más violentas de los pueblos, aunque pueden cambiar el curso de la Historia, no bastan para romper el hilo de la tradición.

El día de hoy es hijo del día de ayer, y los grandes sucesos que señalan nuevos rumbos a la vida de las naciones no se engendran de repente, sino que, por lo común tienen muy remota preparación y honda raigambre en otros hechos, tal vez muy lejanos, que por caminos ocultos a la mirada de los hombres, pero patentes a la divina sabiduría, siguen influyendo de manera eficaz a muchos siglos de distancia.

La Historia de España no comienza en este año. No podemos renunciar a un rico patrimonio de sacrificios y de glorias acumulado por larga serie de generaciones.

Los católicos, particularmente, no podemos olvidar que, por espacio de muchos siglos, la Iglesia e instituciones hoy desaparecidas convivieron juntas, aunque sin confundirse ni absorberse, y que de su acción coordinada nacieron beneficios inmensos que la Historia imparcial tiene escritas en sus páginas con letras de oro.

La Iglesia no puede ligar su suerte a las vicisitudes de las instituciones terrenas. Estas se mudan, y la Iglesia permanece; éstas son perecederas, y la Iglesia es inmortal.

Pero la Iglesia no reniega de su obra. En tiempos de anarquía afirmó con su autoridad el poder real, y con ello prestó servicios inestimables a la causa del orden y del progreso, como han tenido que reconocer los mismos historiadores adversos al Cristianismo.

Cuando nuevas circunstancias hicieron preciso nuevos cambios en el gobierno de la Nación, la Iglesia, sin descender a contiendas ni rivalidades, siguió ejerciendo su misión de paz, y el bien público tuvo en ella solidísimo baluarte.

Con frecuencia, en el espacio de largos siglos, tuvo que defender su independencia contra intrusiones del poder civil, y en más de una ocasión hubo de recordar sus deberes a los gobernantes que los olvidaron; pero respetó siempre la forma de gobierno que la Nación se había dado a sí misma.

No tenemos por qué ocultar que, si bien en las relaciones entre la Iglesia y el Poder civil hubo paréntesis dolorosos, la Monarquía en general fué respetuosa con los derechos de la Iglesia.

El reconocerlo así es tributo debido a la verdad, sobre todo cuando se recuerdan con fruición los errores y se olvidan los aciertos y los beneficios. España toda y particularmente nuestra Archidiócesis, están llenas de monumentos que hablarían si nosotros callásemos.

Séanos lícito también expresar aquí un recuerdo de gratitud a Su Majestad D. Alfonso XIII, que durante su reinado supo conservar la antigua tradición de fe y piedad de sus mayores.

¿Cómo olvidar su devoción a la Santa Sede, y que él fué quien consagró a España al Sagrado Corazón de Jesús?

Y los toledanos, dejando a un lado otros acontecimientos, recordaremos siempre aquel día en que puso su bastón de mando a los pies de nuestra Señora de Guadalupe, y aquí, en el pasado mes de Octubre, al que, asistiendo al Concilio Provincial celebrado en Toledo, nos hizo volver otros gloriosos Concilios toledanos que en el mundo sirvieron a nuestra vida nacional.

La hidalgía y la gratitud podían estar en el alma siempre fué muy cristiano y muy español rendir pleitesía a la majestad caida, sobre todo cuando la desgracia aleja la esperanza de mercedes y la sospecha de adulación.

GRAVEDAD DE LA OBRA PRESENTE

Para ponderar la gravedad de los momentos actuales, nos bastará transcribir aquí las palabras que dejamos escritas en 27 de febrero del próximo pasado año.

«Es unánime persuasión en todos, decíamos entonces, que los instantes actuales son de grave trascendencia para el porvenir de nuestra Patria.

Bien es verdad, que aun en las circunstancias más difíciles de nuestra historia, una palpable protección del cielo nos ha salvado, con singular Providencia, de gravísimos riesgos:

Mas deber nuestro es no tentar a Dios: antes hemos de procurar, con una actuación intensamente cristiana, precaver los males que parece se avecinan, atrayendo sobre nuestra Patria las bendiciones del cielo.

No es preciso descender a pormenores que seria delicado tocar y que, por otro lado, son de todos conocidos. Baste decir que la gravedad del momento presente, en orden a un porvenir que tan incierto se vislumbra, no se circunscribe sólo a la situación política, sino que se extiende al mismo orden social y al moral y religioso.

Pero la situación que conmueve a los ánimos es parte, sin duda, para que éstos se preocupen más inmediatamente de los futuros derroteros políticos de la Patria. Unos y otros con febril actividad se apresuran a tomar posiciones para la defensa de sus ideas e intereses. Los antiguos partidos se reorganizan; se anuncia la formación de otros nuevos; se plantean uniones o federaciones circunstanciales para sumar fuerzas: indicio todo ello que nos hallamos en vísperas de una intensa lucha política.

Ni aun los más avisados y previsores pueden conjeturar las consecuencias que tendrá esta contienda, no sólo en el orden político, sino también en el social y muy principalmente en el religioso. Mas, como quiera que sea, ha de tenerse por cierto que, aun considerada la situación no más que en este último aspecto, la hora actual debe calificarse de grave.

Los hechos han confirmado plenamente cuanto entonces escribimos. Algunas disposiciones recientes en daño de los derechos de la Iglesia y otras más graves que ya se anuncian y que, por ser de todos conocidas, no enumeramos, dan a los momentos actuales una gravedad extraordinaria e imponen a la conciencia de todos los católicos españoles gravísimas responsabilidades, que no podrán eludir ni ante la historia de la Iglesia, ni, lo que más importa, ante el Tribunal de Dios.

DEBERES RELIGIOSOS DE LOS CATÓLICOS EN LA HORA PRESENTE

Necesario es insistir apremiantemente sobre los deberes religiosos de los católicos en la hora actual.

El arma poderosa, invencible, en todas las necesidades temporales y espirituales, así de los individuos como de los pueblos, es el arma de la oración cuando ésta reúne las condiciones que la señaló el divino Maestro.

En España en estos momentos difíciles no se ha orado ni se ora lo bastante y no se ha hecho la debida penitencia de los gravísimos pecados con que se ha provocado la divina justicia.

Y es necesaria una rectificación de conducta si queremos llegar al triunfo de la buena causa.

Nos hemos dejado dominar por el espíritu de naturalismo que nos envuelve y hemos fiado en demasía el éxito de nuestras empresas a los medios humanos cuando hay que buscar en Dios nuestro Señor el remedio de nuestros males.

Creemos, pues, imprescindible se organice, principalmente por las señoras católicas, una cruzada de oraciones y de sacrificios para impetrar del cielo el auxilio de que en estos momentos estamos tan necesitados.

Provechosísimamente podrán tomar a su cargo esta obra bajo la dirección de los *Rvds. Párrocos las señoras que en una u otra forma militan bajo las banderas de la Acción Católica.*

Extensísimo es el campo de acción que se las ofrece, promoviendo con toda intensidad no sólo oraciones privadas por las necesidades de la Patria, sino actos solemnes de culto, públicas rogativas, peregrinaciones de penitencias y utilizando los medios tradicionalmente usados en la Iglesia para implores la divina misericordia, conforme a lo que dispusimos en nuestra circular del día 15 de Abril.

DEBER DE LOS CATÓLICOS EN CUANTO AL GOBIERNO PROVISIONAL

Innecesario es, por sabido de todos, hacer constar que la Iglesia no siente predilección hacia una forma particular de Gobierno.

Podrá discutirse en el terreno de los principios filosóficos cuál es la mejor, y aun puede suceder que entre los filósofos cristianos haya cierta unanimidad en preferir determinado régimen; pero la Iglesia, sobre este punto, ha reservado su parecer.

Y es natural que así haya procedido, ya que la mejor forma de Gobierno de una nación no se ha de determinar solamente a la luz de los principios filosóficos, sino ponderando multitud de circunstancias de lugar, tiempo y personas. La tradición, la historia, la índole y temperamento de cada pueblo, su cultura y civilización, sus usos y costumbres, su estado social, hasta su geografía y las circunstancias externas que le rodean, pueden hacer preferible una forma de Gobierno que teóricamente no sea la más perfecta.

Siendo el fin directo de la autoridad civil el promover el bien temporal de sus súbditos, no toca a la Iglesia, que tiene un fin mucho más alto, descender a un campo donde se ventilan intereses que, aunque muy respetables, son de un orden inferior.

Mas no por eso se desentiende por entero del bien temporal de sus hijos. Es misión de paz la suya, y para mantener la paz, que es fundamento del bien público y condición necesaria de progreso, está siempre dispuesta a colaborar, dentro de su esfera de acción, con aquellos que ejercen la autoridad civil.

Pero a su vez, pide que ésta respete los derechos que otorgó a la Iglesia su divino Fundador y que, dentro también de la esfera de acción del Poder temporal, la ayude, en perfecta concordia, al cumplimiento de sus altísimos fines.

A la luz de estos principios, fácil es determinar cuáles son los deberes que incumben a los católicos con relación al Gobierno provisional que actualmente rige los destinos de nuestra Patria.

La Santa Sede, en ocasiones análogas, ha trazado normas, que los católicos deben cumplir con fidelidad.

Según estas normas, es deber de los católicos tributar a los Gobiernos constituidos de hecho respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y para el bien común.

Sirvanos en este punto de guía para nuestra conducta la prudentísima actitud de la Santa Sede, que, al darse por notificada de la

constitución del nuevo Gobierno provisional, declaró estar dispuesta a secundarle en la obra de mantenimiento del orden social, confiando que él también por su parte respetará los derechos de la Iglesia y de los católicos en una Nación donde la casi totalidad de la población profesa la Religión católica.

DEBERES DE LOS CATÓLICOS EN SU ACTUACIÓN POLÍTICA

Más de una vez se ha repetido en estos últimos tiempos que la Iglesia no debe mezclarse en la política. Pero, como ya advirtió Pío X, «no es ciertamente la Iglesia quien ha bajado a la arena política; *hanla arrastrado a ese terreno para mutilarla y despojarla.*»

«No se le ha de conceder cuando menos el derecho de defenderse en el mismo terreno en que se la combate? «Cuando la política toca al altar, decía Su Santidad Pío XI a la Federación Universitaria Italiana, entonces la Religión y la Iglesia y el Papa, que la representa, *no sólo tienen derecho, sino deber* de dar indicaciones y normas, que los católicos tienen el derecho de buscar y la obligación de seguir.»

De aquí que el Sumo Pontífice Pío X reprobó la doctrina que afirma que es un abuso de la autoridad eclesiástica el que la Iglesia prescriba al ciudadano lo que debe hacer.

No se preocupa la Iglesia de intereses puramente temporales; no quiere invadir ajenas jurisdicciones ni privar a sus hijos de la legítima libertad en aquellas cosas que Dios dejó a las disputas de los hombres; pero tampoco puede consentir que se desconozcan o se mermen sus derechos ni los derechos religiosos de sus hijos.

Cuando esto suceda, cumplirá un deber, al que no puede sustraerse sin faltar a su misión divina, advirtiéndoles el peligro, excitándoles a conjurarlo y dándoles normas para el mejor logro de sus fines superiores.

A los católicos toca el acatar y cumplir los mandatos y normas de la Iglesia, que con la asistencia del Espíritu Santo, que la gobierna, y con la experiencia de veinte siglos, sabe hallar siempre, en medio de las mayores oscuridades, el camino de la verdad y del acierto.

La Iglesia, pues, nos enseña en primer lugar que «cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, *ningún católico puede permanecer inactivo*, retirado en su hogar o dedicado solamente a sus negocios particulares.»

«Preparar y acelerar—dice Su Santidad Pío XI en su Encíclica acerca de la realeza de Nuestro Señor Jesucristo—la vuelta de la sociedad a Jesucristo con la acción y con las obras es ciertamente deber de los católicos; para muchos de ellos parece que no tienen en

la convivencia social, ni el puesto ni la autoridad que es indigno faltar a quienes llevan ante sí la auroracha de la verdad. Estas desventajas quizá proceden de la *oposita y triple: de los buenos, y de los abstinentes* de luchar o resisten debilmente con lo cual, y a veces como los enemigos de la Iglesia cobren mayor temeridad y audacia.

«A vosotros, decía a su vez a los católicos Pío X en su Enciclica «*Communium rerum*», a vosotros toca resistir valerosamente contra esta funestísima propensión que tiene la moderna sociedad a adormecerse, cuando más arrecia la lucha contra la Religión, en una merced vergonzosa, buscando una *rit neutralidad* levantada sobre vanos respetos y compromisos; todo en daño de lo justo y de lo honesto, divididos de aquella infalible y terminante sentencia de Cristo: El que no está conmigo está contra mí.»

Y el mismo Pío X, en su áureo documento *Inter Catholice Hispaniae*, escribió estas palabras: «Tengan todos presente que ante el peligro de la Religión y del bien público, a nadie es lícito permanecer ocioso.»

De lo cual lógicamente dedujo nuestro venerable predecesor el Cardenal Aguirre, en la primera de sus memorables Normas de Acción Católica y Social, «que los católicos no deben abandonar en manos de sus enemigos el gobierno y administración de los pueblos.»

A esto equivaldría su abstención, pues, como advierte el Papa León XIII, en su Enciclica *Immortale Dei*: «Si los católicos se están quietos y ociosos, fácilmente se apoderarán de los asuntos públicos personas cuyas ideas pueden no ofrecer grandes esperanzas de salvación al gobierno.»

Para impedir que esto suceda, se requiere por parte de los católicos una prudente y eficaz actuación política. «¿No es deber de todos los católicos—decía Su Santidad Pío X en su Enciclica de 25 de Agosto de 1910—usar de las normas políticas que tiene a la mano para defender a la Iglesia y también para obligar a la política a mantenerse en su terreno y no ocuparse de la Iglesia sino para darle lo que le es debido?»

Esta actuación debe encaminarse de manera especial a que «tanto a las Asambleas administrativas como a las políticas de la Nación varían aquellos que, consideradas las condiciones de cada elección, parezcan que han de mirar mejor por los intereses de la Religión y de la Patria en el ejercicio de su cargo.»

¿Será preciso insistir en la oportunidad de esta advertencia en los momentos actuales de la vida española, cuando van a elegirse unas Cortes constituyentes que han de resolver no sólo sobre la forma de gobierno, que al fin es cosa de importancia secundaria y accidental, sino sobre otros muchos puntos de gravedad suma, de trascendencia incalculable para la Iglesia y los católicos y para toda la Nación?

Nos hallamos en una de esas horas en que se va a decidir, quizá de manera irremediable, de la orientación y del porvenir de nuestra Patria.

En estos momentos de angustiosa incertidumbre, cada católico debe medir la magnitud de sus responsabilidades, y cumplir valerosamente con su deber. Si todos ponemos la vista en los intereses superiores, sacrificando lo secundario en obsequio de lo principal: si unimos nues-

tros esfuerzos para luchar con perfecta cohesión y disciplina, sin vanos alardes, pero con fe en nuestros ideales, con abnegación y espíritu de sacrificio, podremos mirar tranquilamente el porvenir, seguros de la victoria.

Si permanecemos «quietos y ociosos»; si nos dejamos llevar «de la apatía y de la timidez»; si dejamos expedito el camino a los que se esfuerzan en destruir la religión o fiamos el triunfo de nuestros ideales de la benevolencia de nuestros enemigos, ni aun tendremos derecho a lamentarnos cuando la triste realidad nos demuestre que, habiendo tenido la victoria en nuestra mano, ni supimos luchar con denuedo ni sucumbir con gloria.

En las circunstancias actuales todos los católicos, *sin distinción de partidos políticos*, deben unirse en apretada falange. Lo que hace años el Papa Pío X juzgaba «necesario e indispensable», lo es hoy más todavía: «Necesario e indispensable—decía aquel llorado Pontífice—ha juzgado la Iglesia respecto de los católicos de España que, si no pudiera lograrse una unión permanente y habitual, se establezcan, cuando menos, acuerdos transitorios, *per modum actus transeuntis*, siempre que los intereses de la Religión y de la Patria exijan una acción común, especialmente ante cualquiera amenaza de atentado en daño de la Iglesia.»

«Adherirse prontamente a tal unión o acción práctica común—continúa el citado Sumo Pontífice—*es deber imprescindible de todo católico, sea cual fuere el partido político a que pertenezca.*»

Quisiéramos no tener que escribir nombres que pueden ser bandera de combate de diversos grupos; pero Nos hemos impuesto el deber de hablar con entera claridad, y lo cumpliremos lealmente. Y así decimos a todos los católicos: Republicanos o monárquicos, podéis noblemente disjuntar cuando se trate de la forma de gobierno de nuestra nación o de intereses puramente humanos; pero cuando el orden social está en peligro, cuando los derechos de la Religión están amenazados, *es deber imprescindible de todos uniros para defenderlos y salvarlos.*

Es urgente que, en las actuales circunstancias, los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social.

En la elección de estos candidatos no habrá de darse importancia a sus tendencias monárquicas o republicanas, sino que se mirará, sobre toda otra consideración, a las antedichas garantías.

Podría servirnos de ejemplo lo que hicieron los católicos de Baviera después de la revolución de noviembre de 1918: todos unidos y concordados trabajaron ardorosamente para preparar las primeras elecciones en las cuales alcanzaron una notable mayoría, aunque sólo relativa; de manera que, constituyendo el grupo parlamentario más fuerte, pudieron, como atestiguan los hechos, salvar al país del bolchevismo que amenazaba y que aun llegó a dominar algún tiempo, y defender los intereses de la Religión hasta la conclusión de un Concordato, muy favorable a la libertad de la Iglesia y de las escuelas confesionales.

No se hablaba de monarquía o de república, sino que toda la campaña electoral se basó en estos dos puntos: defensa de la Religión y defensa del orden social.

Esta coincidencia será fácil si todos los católicos que pertenecen a un partido cualquiera, acuerdan que «están obligados, como enseña Su Santidad Pío X, a conservar siempre íntegra su libertad de acción y de voto para negarse a cooperar, de cualquier manera que sea, a leyes o disposiciones contrarias a los derechos de Dios y de la Iglesia, sino también a hacer en toda ocasión oportuna cuanto de ellos dependa para sostener positivamente los derechos sobre dichos».

Juzgamos innecesario descender a más pormenores. No es tiempo de largos discursos, sino de orar, de obrar, de trabajar, de sacrificarse, si es preciso, por la causa de Dios y por el bien de nuestra amada Patria.

Si lo hacéis todos, venerables Hermanos y muy amados Hijos, Dios bendecirá vuestros esfuerzos. Prenda de la bendición divina sea la que Nos os damos en el nombre del *Padre* y del *Hijo* y del *Esíritu Santo*.

V. - 4 de mayo de 1931. Circular. A nuestros amados
diocesanos.

CEC de Tarragona, año 61. 5 de mayo de 1931. núm. 3. págs. 197-202.

Atento el Pastor de almas al bien espiritual de sus fieles hijos, no puede menos de hacer oír su voz ante los grandes acontecimientos o cambios político-sociales de los pueblos, recordando las normas de la Iglesia, formuladas ya en los Sagrados Cánones ya por medio de documentos pontificios, a las cuales deben atenderse los católicos todos en su actuación por el bien común de la sociedad; y está fuera de toda duda que el cambio de régimen obrado poco ha en nuestra Patria alcanza aquella categoría de los grandes acontecimientos, no sólo por constituir una fase muy destacada en los anales de la historia, si que también por la trascendencia que pueda tener en los futuros destinos de nuestro pueblo.

Afortunadamente para los creyentes, la Iglesia nuestra Madre, Guía suprema de todos nuestros actos, así en el orden privado como en el público, es Maestra infalible de verdad; de ahí que sus normas sean también invariables, como la verdad misma, y aplicables a todos los estados sociales en que puedan hallarse los pueblos. Por eso hemos dicho que para el presente caso nos bastará recordar dichas normas, que detalladamente expusimos y comentamos en nuestra Exhortación Pastoral de fecha 19 de Marzo del año 1925 (Véase «Boletín Oficial Eclesiástico», año 61, núm. 6).

Repitiendo la feliz expresión del santo Obispo de Hipona, *pax tranquillitas ordinis*, manifestábamos entonces que la paz debe ser como la base de la tranquila convivencia de todos los componentes de la sociedad, ocupando ordenadamente cada uno el lugar que le corresponda en su aportación de actividades al bien general; mas para que tal propósito surta su efecto cabe tener presente también las áureas palabras del preclaro Pontífice León XIII: «La Religión, y sólo la Religión, crea el lazo social» (Enc. *Inter gravissimas*).

Puesto el principio religioso como fundamento de la sociedad, las relaciones que deben guardar todos y cada uno de los miembros respecto de sus superiores, iguales e inferiores, así como las diversas colectividades que han de convivir en los pueblos, van desenvolviéndose en un ambiente de mutua y cristiana cordialidad, la cual constituye la mayor garantía del sostenimiento del orden y el mejor presagio de un feliz porvenir.

¿Qué diferente sumisión a la autoridad cabe esperar de parte de los súbditos, cuando éstos la consideran no simplemente como una delegación humana, sino como una institución divina! *Non est potestas nisi a Deo*. (Rom. XIII, 1), dijo el Apóstol refiriéndose al origen divino de la autoridad, siendo oportuno reproducir aquí la ingeniosa interpretación que San Juan Crisóstomo da a tales palabras *No hay potestad sino de Dios*: «¿Qué dices? ¿Luego todo príncipe ha sido constituido por Dios? No es esto lo que digo, pues no hablo de cualquier príncipe, sino de la cosa misma, de la potestad. Así, pues, es obra de la divina sabiduría que existan las potestades, que haya quienes gobiernen; por lo cual no se dice: *No hay príncipe que no sea de Dios*, sino: *No hay potestad que no sea de Dios*». No son, por consiguiente, los hombres quienes crean la autoridad. «¿Cómo podrían crear lo que es superior a ellos? — dice a este propósito el Dr. Torres y Bages —. Podrán determinar la persona que ejerza la autoridad, pero ésta viene de Dios, y por tanto debemos respetarla sea quien quiera el que la ejerza, como el hijo debe respetar y obedecer al padre, aunque le sea superior en talento, en instrucción y hasta en santidad» (*De la Ciudad de Dios*, V).

A su vez la autoridad, contando ya con el acatamiento, respeto y obediencia que le prestan aquellos que la consideran como representante de Dios, tratará con justicia y equidad a sus subordinados, sabiendo que debe dar cuenta de sus actos al Señor de Cielos que le ha de juzgar: *Scientes quod et vos Dominum habetis in coelo* (Colos. iv, 1). No menos claras y expresivas fueron las palabras que dirigió el propio Jesús a Poncio Pilatus: *No tendrías poder ninguno sobre mí, si no se te hubiera dado de arriba* (Joan. xix, 11). Atendiendo a tales consideraciones, pudo escribir el mencionado Pontífice León XIII: «Y con respecto a los súbditos y a la sociedad que tienen encomendada a sus cuidados, deber es de los gobernantes que su mandato e imperio sea justo y en cierta manera paternal, porque el poder legislativo que Dios tiene sobre los hombres, está también unido con su bondad de Padre» (Enc. *Immortale Dei*).

Asimismo, elevando el raciocinio a este plano superior de la autoridad y procediendo según las normas trazadas por el mismo Legislador supremo, desaparecen las dificultades que pudieran surgir en el ejercicio de las Potestades diversas, puestas también por Dios dentro de un mismo orden o sociedad, cuales son la Iglesia y el Poder civil. *Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios* (Luc. xx, 25), dijo el propio Redentor en ocasión memorable, cuando sus contradictores intentaban ponerle asechanzas creándole dificultades en sus relaciones con el Poder civil. Con tan sencilla fórmula definió claramente los campos en que han de actuar ambas Potestades, exigiendo de las mismas mutuo respeto y consideración en sus actuaciones, ya que una y otra proceden de Dios, pues si hemos visto que a la primera se aplican las palabras del Apóstol, *No hay potestad sino de Dios*, de los Pontífices y Prelados de la Iglesia se dice también que fueron puestos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios (Act. ix, 28).

No tenemos por qué insistir en el saludable efecto que produce en los súbditos la aplicación de las precedentes normas por parte de los elementos directores de los pueblos; esta ejemplar cordialidad de relaciones sirve como de estímulo para que todos mejor se apresten a aportar su colaboración al bien público. Así lo recomiendan los mismos Sumos Pontífices a los fieles católicos: «Tomar parte en los negocios públicos, decía León XIII, a no ser donde por la singular condición de los tiempos se provea otra cosa, es honesto; y aún más, la Iglesia aprueba que cada uno contribuya con su trabajo al común provecho, y cuanto alcancen sus fuerzas defendiendo, conserve y haga prosperar la cosa pública» (Enc. *Libertas*). Y en otra ocasión escribió el mismo Pontífice: «En general, el no querer tomar parte ninguna en las cosas públicas, sería tan malo como no querer prestarse a nada que no sea de utilidad común» (Enc. *Immortale Dei*).

Consecuencia lógica de esta actuación de los católicos en los negocios públicos lo es su intervención en los comicios para poder influir de manera más eficaz en la sana y cristiana orientación de los problemas que se presentan en la vida de los pueblos. No sólo se establece esta positiva obligación, sino que además se reputa como desertar del propio deber el abstenerse de emitir el voto en pro de los intereses sagrados que todo católico viene obligado a defender: «En las elecciones, todos los buenos católicos están obligados a apoyar no sólo los propios candidatos, cuando las circunstancias permiten presentarlos, sino también, cuando esto no sea factible, a todos los que ofrecen garantías para el bien de la Religión y de la Patria, a fin de que salga elegido el mayor número de personas dignas. Cooperar con la propia abstención a la ruina del orden social, con la esperanza de que surja de tal catástrofe una condición de cosas mejores, sería actitud reprobable que, por sus fatales efectos, casi se reduciría a traición a la causa de la Religión y la Patria» (Norma 11.ª dictada por Pío X a los católicos españoles).

Como católicos, pues, y como ciudadanos, todos deben aprestarse a contribuir al bien común con su voto y con su intervención en cualquiera forma que se juzgara conveniente, considerando que tal conducta equivale a cumplir uno de los más sagrados deberes que impone la condición de ser social y cristiano.

En consonancia con todo lo expuesto, disponemos:

1.º Los Rdos. Párrocos y encargados de iglesias leerán esta Nuestra Circular a los fieles rogándoles especiales oraciones para que Dios Nuestro Señor conceda luz y gracia a los gobernantes y a los súbditos en orden a la conservación de la paz y al fomento del bienestar y prosperidad de la Iglesia y de la Patria. A este fin, les autorizamos puedan celebrar alguna función con exposición del Santísimo.

2.º Todos los sacerdotes y fieles deberán guardar el respeto y obediencia a los poderes constituidos y prestarles su cooperación para todo lo relacionado con el bien público y mantenimiento del orden, según norma constante de la Iglesia.

3.º Los sacerdotes se esmerarán en dar ejemplo de estar muy unidos entre sí, con los fieles y con el Prelado, intensificando la instrucción religiosa del pueblo y la enseñanza del catecismo, procurando ganarlos a todos para Cristo.

4.º En las instrucciones a los fieles, como en toda su actuación, han de mantenerse por encima y fuera de la política y evitar todo lo que pudiera dar pretexto a tal interpretación; aun en el orden privado deben guardar circunspección exquisita.

5.º Se esforzarán en dar exacto cumplimiento a las disposiciones canónicas referentes a la predicación, sobre todo en las misiones, ejercicios espirituales, homilias, etc., así como en la enseñanza del catecismo en todas las parroquias, colegios y centros de educación. Pondrán especial cuidado en hacerla *ad captum populi*, o sea, en el modo y forma que llegue más al alma de los fieles, la entiendan mejor, sea más pedagógica y agradable y les disponga a grabarla más y más en su corazón y a cumplirla exactamente procurando queden debidamente atendidos todos los fieles, según las normas dictadas por los Prelados de esta Provincia Eclesiástica.

6.º Las campanas y los campanarios, los templos, sus dependencias y demás cosas sagradas están como tales sujetas a la jurisdicción eclesiástica. En cuanto al toque de campanas y colocación de bandera del nuevo régimen se seguirán los usos y costumbres establecidas para los actos oficiales.

7.º Como normas para los fieles tendrán presente que, dentro del régimen constituido en cada país, es obligación de los católicos intervenir en las cosas públicas. Lo exigen el bien común, el orden social y la defensa de los derechos de la Iglesia. La abstención es suicida, ilícita e indecorosa. A costa de sacrificios los fieles, conservando cada uno su partido o tendencia política, deben ponerse de acuerdo para la defensa de los indicados principios fundamentales, haciendo lo posible para ejercitar el derecho de sufragio.

8.º Lo que ahora importa especialmente es la preparación para las elecciones a Cortes Constituyentes. Los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas personales, en las que pueden quedar libres, se han de unir seria y eficazmente a fin de conseguir que para las mencionadas Cortes Constituyentes sean elegidos candidatos que den plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social. En el escoger a dichos candidatos no se deberá dar importancia a sus tendencias políticas o de partido, sino que habrá de tenerse a la vista, como se ha dicho, por encima de todos los demás respetos, la certeza de la dicha garantía.

B. - 10 de mayo de 1931. Carta pastoral sobre los deberes de la hora presente.

BOE de PARAGONA Y LUCA, t. 51, 15 de mayo de 1931, num. 463, págs. 345-349.

En nuestra última Circular sobre el respeto y obediencia a los poderes constituidos, os insinuábamos la posibilidad de que en este número del *BOLETIN* insistiéramos sobre los conceptos de la Carta del Excmo. Señor Nuncio que la motivó y sobre los puntos de vista que sugiere.

Creemos, amados diocesanos, que Nos habréis de agradecer las direcciones que os demos sobre este particular.

No son nada fáciles de señalar las orientaciones para la vida práctica del cristiano en momentos como el presente, en que la acomodación a un nuevo régimen político debe llevar por fuerza una revisión fundamental de derechos y deberes, efecto de nuevas orientaciones en el régimen del país, con la encontrada lucha de opiniones, principios y doctrinas que suele producirse en estos casos.

No ya para las cuestiones gravísimas que deberán regularse en lo futuro, sino para concretar la actitud que desde un principio debamos adoptar es por lo que vamos a formular las observaciones que siguen. Ocurren en estos cambios bruscos de orden social lo que en las tempestades que se desatan de súbito y que cogen al viajante desprevenido: hay que tomar rápidamente una resolución para ponerse a salvo. Y son muchas y muy saqueadas, amados hijos nuestros, las cosas que debemos salvar en los presentes momentos de incertidumbre.

Y antes de entrar en materia permitidnos una observación que justifique el asunto de esta Carta y su tenor. Os parecerá tal vez que nos metemos en política, como vulgarmente se dice. Nada más lejos de nuestro temperamento, de nuestra misión y de nuestro propósito, si por política se entiende lo que en lenguaje corriente, a saber, los manejos, de pensamiento, palabra o acción, en pro o en contra de determinado partido, escuela o institución de gobierno. Dios nos libre de incurrir en un extravío contra el que los mandatos de la Iglesia nos precavan y que podría dañar gravemente los intereses

sagrados que Dios nos confió al encargarnos el régimen de estas Iglesias.

Más si por política se entiende la parte de la ciencia ética, tal como os la definimos en otra ocasión, que tiene por objeto el régimen de los pueblos, no sabríamos, en muchos casos, cómo prescindir de la política, cuando la moral cristiana, cuyos fueros debemos conservar y defender entre vosotros, tiene su parte de política cristiana cuyos principios deben aplicarse al régimen de la porción del pueblo cristiano que Nos está confiado.

De la política tomada en su aspecto moral podríamos decir lo que escribía Balmes en su *Introducción* a sus escritos políticos: «La política nos interesa a todos, porque se roza con todo... Los asuntos religiosos se resienten de la política: testigo la historia de los últimos años; las ciencias y la literatura se resienten de la política: testigos, a más de otras cosas, los planes y reglamentos que varían con los ministerios... Las diversiones públicas se resienten de la política: testigos el teatro y hasta la plaza de toros... La paz doméstica se resiente de la política...» Y ¿quién duda, amados hijos nuestros, que estas cosas que nombra el gran filósofo, como otras muchas, se rozan con la religión, y por ellas se roza ésta con la política?

Cuanto se refiere a la moral, entra, por el hecho mismo, dentro la jurisdicción espiritual, porque la ciencia moral es la de las humanas acciones en cuanto se ordenan al último fin; y éste, porque es sobrenatural, a nadie ha sido confiado más que a la Iglesia y a sus Pastores. No nos moveremos del círculo de la moral cristiana en cuanto señala las normas a seguir en los puntos de que en esta Instrucción Nos ocupamos.

I. — Catolicismo y república.

Considerado el Catolicismo como una religión — y ésta es precisamente su esencia — y la república como una forma política de gobierno, no dicen mayor antagonismo que el que pudiese haber entre monarquía y Catolicismo o entre éste y otra forma cualquiera de poder público. La razón es que, bajo el punto de vista religioso, no sólo no hay ningún principio dogmático o moral que imponga, ni siquiera recomiende, una forma determinada de regirse los pueblos, sino que, de hecho, el Catolicismo ha convivido pacíficamente con todas las formas que puede un pueblo darse para su régimen.

Queda, por lo mismo, descartado desde un principio, por lo que toca a la cuestión de hecho, el reconocimiento por parte de la Iglesia de los poderes constituidos. Ni puede importarle más, en principio, la cuestión de derecho, salva la justicia, que debe ventilarse entre aquellos y por aquellos que han de elegir la forma política del poder que les rija.

Cuanto a la doctrina sobre la excelencia de una forma de gobierno sobre otra, la Iglesia como tal no tiene tampoco preferencias. En este sentido el Evangelio es absolutamente apolítico o super-político.

Esto, en principio; porque el Hijo de Dios no vino a arruinar, sino a afirmar las bases de la sociedad, hasta de la civil. En cuanto a las personas que en sus días y en su país encarnaban la autoridad, tratólas Jesús como sabe quien ha leído con detención el Evangelio: a Herodes le llama «zorro», y representaba la autoridad civil de Israel; a escribas y fariseos les dice «hipócritas y engendros de víboras»; en cambio tiene notorias deferencias con Pilatos, que representaba la intrusión extranjera en el gobierno de la nación. Todos ellos eran gobiernos constituidos de hecho: Jesús los acata, pero procede con ellos según proceden ellos en el ejercicio de su magistratura. El acatamiento de la autoridad no es claudicación de la conciencia.

La doctrina secular de la Iglesia nace coro a la conducta de Jesús y a la felicísima frase que la concreta: «Al César lo que es del César». Dos apóstoles, San Pedro y San Pablo, enseñan esta doctrina en forma que no será superada, ni en ámbito ni en precisión. Notamos de paso que son los dos apóstoles más representativos de la autoridad eclesiástica los que mejor señalan los fueros de la autoridad civil. Y aún notamos más: que la forma definidora que los dos adoptan en punto tan capital, se deba tal vez a la necesidad, creada por el roce inevitable de ambos poderes ya en los comienzos del cristianismo, de resolver una cuestión importantísima que deberá plantearse en todo lugar y tiempo.

Porque Pedro se dirige evidentemente a quienes rehusan, en nombre de la libertad cristiana, el acatamiento a la autoridad de un infiel. ¿Cómo un hijo de Cristo, redimido y liberado por la sangre de Dios, deberá humillarse ante la autoridad de un pagano que no reconoce al verdadero Dios? Y, no obstante, San Pedro es rajante en el precepto: «Estad sumisos a toda humana criatura», es decir, a toda institución o constitución humana de

autoridad, porque los hombres hacen las instituciones y las constituciones, pero la autoridad les sobreviene de Dios: «Y esto por Dios» (1). Y para que nadie, valiéndose de las mismas palabras del Apóstol, pudiera utilizar la bandera de la libertad cristiana para encubrir o legitimar la insubordinación contra la autoridad civil *quasi velamen habentes militiae libertatem* (2), extiende el precepto de la obediencia cuanto se extiende sobre la sociedad la participación y el ejercicio de la autoridad: al rey, o jefe supremo, que está sobre todos, y a los ministros subalternos en la medida que participan de la potestad de regir: *Sive regi, tamquam praecellenti, sive ducibus...*

Para San Pablo no hay exención ninguna del deber de obedecer a los magistrados civiles: *Omnis anima*, dice, esto es, todo hombre, está sujeto a los poderes superiores (3). Es el abstracto por el concreto; poderes equivale aquí a quienes legítimamente los ejercen. Quien tiene derecho y jurisdicción, tiene derecho a que se le reconozcan en el hecho de la vida social, precisamente en el orden y hasta según el aspecto de la jurisdicción: a la potestad civil, obediencia en las cosas temporales; a la eclesiástica, en las de orden espiritual; y dentro de estos órdenes fundamentales, cada cual debe ser obedecido según la forma y porción de la autoridad que tiene: «Al que se debe tributo, tributo; al que impuesto, el impuesto; al que temor, temor; al que honra, honra». He aquí la hacienda, el fisco, la justicia, la preeminencia, por la dignidad, la autoridad o la sangre.

Esta es palabra revelada, amados hijos nuestros; y sobre ser palabra revelada, por lo que toca al Príncipe de los Apóstoles, que a la orden del Maestro pagó un día el tributo por los dos, aun no siendo debido y sólo

para no escandalizar... ¿no podríamos decir que había bebido de los mismos labios del Señor la doctrina de la obediencia a la autoridad legítimamente constituida? Y ¿quién mejor podía enseñar la obediencia que Aquel que la «aprendió como hombre por las cosas que padeció»..., sometiéndose por su voluntad a los poderes legítimamente constituidos, aún en el abuso monstruo de su autoridad?

Escuela de acatamiento a la autoridad pública es la santa Iglesia. Con la literatura de sus Padres y Doctores predicando la sujeción a los poderes de la tierra se llenarían volúmenes,

Gracias a Dios, y por lo que toca a los presentes momentos, a pesar del cambio profundo obrado en las cosas de nuestra patria, «no hemos tenido que sufrir hasta el derramamiento de sangre»... ni parece que sea la persecución violenta la que nos amenaza, como tuvieron que sufrirla la Iglesia y los eclesiásticos en épocas en que, con vocearse menos la democracia, se soltaron contra las cosas de Dios las furias de la demagogia desenfrenada.

Sigamos, pues, la tradición cristiana, hija de la doctrina de Cristo. Obedezcamos, respetemos, veneremos —es palabra papal— a quienes ejerzan autoridad. Los que la tienen, si la ejercen mal, tanto por el mal uso que hagan de sus poderes, cuanto por los atropellos que cometer puedan contra poderes ajenos al suyo, deberán dar cuenta a Dios, aunque en El no crean. Con ello, a más del premio de la obediencia y de la tranquilidad del deber cumplido, «taparemos la boca, dice San Pedro, a la ignorancia de los hombres necios» (1).

He aquí un texto de León XIII que concreta a maravilla los reciprocos deberes de autoridades y súbditos y los que todos tienen ante Dios, Señor del hombre y de la sociedad y de los poderes que los rigen: «Si los jefes del estado se rebajan a usar inicuamente de su pujanza; si oprimen a los súbditos; si pecan por orgullosos; si malvierten los haberes y hacienda y no miran por los intereses del pueblo, tengan bien entendido que han de dar estrecha cuenta a Dios; y esta cuenta será tanto más rigurosa, cuanto más sagrado y augusto hubiese sido el cargo o más alta la dignidad que hayan poseído. «Los poderosos serán atormentados poderosamente».

Con esto se logrará que la majestad del poder esté acompañada de la reverencia honrosa que de buen grado le prestarán, como es deber suyo, los ciudadanos. Y en efecto, una vez convencidos de que los gobernantes tienen su autoridad de Dios, reconocerán estar obligados en deber de justicia a obedecer a los príncipes, a honrarlos y obsequiarlos, a guardarles fe y lealtad, a la manera que un hijo piadoso se goza en honrar y obedecer a sus padres. «Toda alma esté sometida a las potestades superiores».

No es menos ilícito el despreciar la potestad legítima, cualquiera que sea el poseedor de ella, que el resistir a la divina voluntad, puesto que los rebeldes a la voluntad de Dios caen voluntariamente y se despeñan en el abismo de la perdición. «El que resiste a la ordenación

de Dios, y los que le resisten, ellos mismos atraen a sí la condenación» (1). Por tanto, quebrantar la obediencia y acudir a la sedición, sublevando la fuerza armada de las muchedumbres, es crimen de lesa majestad, no solamente humana, sino divina» (2).

II. — Unos reparos.

Dos reparos podrían oponerse hoy a esta doctrina. Es el primero la imputación de variabilidad en la Iglesia, y hasta de un acomodamiento poco honroso y demasiado rápido al nuevo estado de cosas.

Creemos que para nuestros amados diocesanos no es esto más que un reparo mental, no una acusación. El Papa nos ha señalado el camino, y éste es para nosotros el único a seguir. Y el Papa no se precipita: su doctrina y su actitud actual es ya vieja de siglos. Y aunque fuera circunstancial la orientación que nos diera el Papa y diversa, que no lo es, de la señalada en otros casos, no habría razón ninguna que nos relevara de la obediencia. El adoctrinamiento de la grey cristiana, dentro de las líneas inmutables de la verdad, tiene sus exigencias de momento, como las tiene la táctica en un combate. Al general en jefe toca señalar los medios para el logro de los objetivos que se ha propuesto.

Porque no es cambio de frente el que opera la Iglesia en estos casos. El cambio se opera fuera de ella. Nosotros, en la doctrina y en el hecho que la concreta, estamos donde nos situó Jesucristo hace veinte siglos. Diríamos que la Iglesia es el monte que tiene su firmeza en sus cimientos eternos y en su *mole—mole sua stat*—y que ve pasar y repasar sobre su cielo, en su duración sin fin y en su imperturbabilidad, días de tormenta y de calma apacible, densas nubes cargadas de rayos y horas de sol acariciador.

Nosotros, individual y socialmente, somos los de un día, y acostumbrados a un día de sol, nos asombra y asusta la aparición de una tormenta, a la que asistimos como a cosa insólita.

Ni se sitúa la Iglesia al abrigo de ningún caracol al amonestarnos para que respetemos y acatemos los poderes constituidos. Para la santa Iglesia no hay soles que calienten más. No tiene más Sol que el de justicia, de que habla el profeta (2), que es el que alumbra y da vida a sus siglos y que es el luminar de la ciudad eterna adonde vamos.

En cambio, ha vivido la Iglesia en feliz y fecundo consorcio con gobiernos democráticos de denominación republicana, como en alguno de los Estados de sudamérica. Y ¿quién ignora que en nuestra Europa, en la nueva república alemana, puede el catolicismo hacer una labor, de penetración pacífica, habiendo ya logrado visibles conquistas, tal vez imposibles durante el imperio?

No; la Iglesia no es monárquica ni republicana; es una cosa y otra, según los países y los tiempos, en cuanto colabora con repúblicas y monarquías; no por espíritu de servidumbre o utilidad, ni por afán de hegemonía política, sino por ley de su constitución y mandato de su Autor y para cumplir sus fines de orden sobrenatural-social.

De la constitución de la Iglesia tal vez podría sacarse un argumento en pro de la doctrina filosófica de la excelencia de la monarquía sobre toda otra forma de gobierno; pero de su régimen y de su espíritu deberán siempre aprender todas las democracias; porque su sentido político-espiritual, con igualdad de leyes, de subsidios, o fin, el ejercicio secular de su poder, sus entrañas de caridad, y hasta su misma doctrina dogmática y moral le dan el lugar preeminente entre todos los gobiernos populares, que al fin, toda la Iglesia, jerarquía y fieles, no es más que un solo pueblo, el pueblo de Dios, *populus Dei*; y en latín de Dios, *Et famulos tuos... Familiam tuam*.

Esta independencia de la Iglesia, de criterio y de conducta política, para con los poderes de la tierra, es cosa verdaderamente providencial. Porque así ha tenido ya solamente la supremacía que le corresponde, por razón de su jurisdicción y de sus fines eternos, sino la que le da la superioridad que le viene de su inmutabilidad y trascendencia con respecto a las vicisitudes de la existencia, ya que su grandeza no depende de ninguna grandezza, ni está su poder atado a ningún poder y la certeza de su perpetuidad que le consiente valerse de toda grandezza, de todo poder para ejercer, sin recelos, cuando los poderes civiles comprenden la misión de la Iglesia, una eficacia que no tendría si se aliara con imperios, monarquías o repúblicas como una forma de política. Seríamos la diplomacia católica.

Otro reparo podría hacerse a la doctrina de la Iglesia. Es una observación meramente local, nacional, española. Es una observación meramente local, nacional sobre la trayectoria de la historia de la república en España y de las tendencias de los hombres republicanos. La república en nuestro país, diréis, ha representado siempre la tendencia izquierdista extrema y, por lo que atañe a nuestra religión, república parece ser sinónimo de anticlericalismo.

No queremos atenuar la fuerza de la acusación. Es verdad; hasta ahora —nos referimos a la historia, no a lo presente,— la república española ha estado lejos de prodigar a la Iglesia su protección, ni le ha brindado, en sus propósitos y programas, halagüeño porvenir. Las cosas son como son, y desgraciadamente son así, a lo menos hasta ahora han sido así. Fundadamente esperamos que se rectifiquen criterios y conductas y quede en nuestra España definitivamente purificado el nombre de república de la mala nota que se le atribuyó.

Y porque son las cosas así, y aumenta ello la fuerza de la objeción, hemos visto, a pesar del buen propósito de conservar el orden, que el cambio de régimen, sin culpa de los poderes constituidos y hasta contra sus prevenciones, ha sido señalado en España con profanación de cruces y sagradas imágenes, con gritos contra personas y cosas sagradas. Alguien se ha creído, no lejos de nosotros, con derecho a descolgar de su escuela el Santo Crucifijo y a prohibir al sacerdote la entrada en ella en cumplimiento de una función sagrada y legal. Expresamos aquí el dolor con que hemos debido consentir fuese retirada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús de un lugar público, donde poco más de un año ha se había entronizado entre aclamaciones del cristiano pueblo, en forma de máximo esplendor oficial.

Pero aun así, amados diocesanos, nada pierden de su fuerza las razones y la enseñanza tradicional de la Iglesia.

Ante todo, cualquiera que sea la actuación de un gobierno, desde el momento en que no se trata de un partido político sino de un régimen que, de simple hecho o de pleno derecho, está establecido y rige los destinos del Estado, es absolutamente separable, y de hecho debe separarse, la cuestión de su ideología y la de la autoridad que posee; ni se le puede hacer responsable de desmanes que no autorice o ampare. Por lo mismo, si su doctrina política deja de ser aceptable en algún punto, no puede dejar de serlo su autoridad cuando legítimamente se ejerce; y la ejercerá legítimamente siempre que legisle dentro del ámbito de su jurisdicción y según las exigencias del bien común, fin supremo de toda autoridad civil.

Aquí, en orden al bien común y a la conservación del orden se exige nuestro respeto y colaboración con los poderes constituidos; y ello nos dará racionalmente el derecho a que los mismos poderes hagan respetar, por parte de quienes podrían ampararse en su ideología, lo que de más caro tenemos en nuestra vida, los senti-

mientos religiosos y las cosas santísimas de nuestra religión. Ni la Iglesia nos exige más que este acatamiento y obediencia que derivan de una construcción legítima del poder político y de sus funciones honestas. Un prejuicio de que otro pueda obrar mal no legitima un juicio que nos exima de obrar bien.

Téngase, además, en cuenta que los sistemas se exageran en la oposición. Hablamos en tesis y no exponemos criterios que se deriven de hechos ya realizados. Vendrán estos o no vendrán; pero entre tanto, no podríamos evadir la responsabilidad de una actuación adversa si restáramos nuestra asistencia a los gobernantes en aquello en que tienen derecho a esperarla de todo buen ciudadano. Es pobre política la de irse al Aventino cuando se plantean gravísimos problemas para la comunidad.

De donde resulta una eficaz lección de apostoliado cristiano social. «No quieras ser vencido por el mal, dice el Apóstol, antes vence al mal por el bien.» Lo cual puede ser interpretado en dos sentidos; en el de aumentar el bien en la sociedad, lo que disminuirá forzosamente el mal y sus derechos sociales, si alguien pudiera alegarlos, y el de rendir «fuerza de bondad y caridad a quien pudiese habernos malquerido. Este es el máximo triunfo de la doctrina y de la virtud ~~crístianas~~. Ya Séneca había notado los triunfos de la bondad sobre los malos y el mal: *Vincit malos pertinax bonitas*. Y si la bondad toma la forma de masas sociales enormes — aun podemos lograrlas — será más respetable que diluida o atomizada.

Ni queremos ocultar otra razón que fundamos en nuestra propia culpa. Sentimos en estos graves momentos, amados hijos nuestros, una pena que nos preña el corazón. Es pena de nuestros pecados y de los de todos, de comisión y de omisión, en el orden cristiano social. Hemos trabajado poco, tarde y mal, mientras pudimos hacerlo, mucho y bien, en horas de sosiego y bajo un cielo apacible y protector.

No podemos concretar aquí; pero tratándose de la venerable clase sacerdotal, cuyas virtudes personales reconocemos y envidiamos, *hemos* de decir que nos hemos movido poco, y el verdadero apostoliado es movimiento, hijo de la caridad que *acosa*: *Urget nos*. Hemos llenado muy bien nuestros ministerios clásicos de santificación de nuestros hermanos; pero no *hemos* trabajado en el plano en que se agitan hoy los pueblos. No hemos advertido que si en el fondo de las aspiraciones po-

pulares de cultura, de bienestar, de legítimas reivindicaciones sociales no se pone el fermento religioso que debe vivificarlo todo; el alma del pueblo se vaciará de religión, que no puede separarse de las cuestiones vitales de la sociedad, y se dejará seducir por quienes, aun engañándole con promesas irrealizables, le ofrecen el concurso de su ideología, de sus dineros, de su esfuerzo.

Y el pueblo ha sido conquistado, o está a punto de serlo, bien lo sabéis los que estáis en contacto con él. Y no debía serlo, porque por el fondo de su alma, buena y cristiana, aun nos pertenece.

Cuanto a los seglares, su apostolado ha sido escaso y desorganizado. Nos gana en esto el adversario. Carecemos de hombres de convicción y de abnegación cristianas. Hay convicción personal cristiana en muchos; convicción «católica», es decir, este arraigo profundo de la idea religiosa que lleva con fuerza a la expansión social del pensamiento y de la vida cristiana, con espíritu de solidaridad y de conquista, con elevación verdaderamente cristiana sobre conveniencias de personas y banderías, con amor entrañable a la santa Iglesia y a sus cosas en nuestra patria querida, con la fe iluminada que se requiere para dar razón de nuestras creencias y tapar la boca al adversario de ellas, con la prudencia sagaz para aplicar el remedio dondequiera que aparezca el mal, esto, bien sabéis, amados hijos nuestros, que no abunda. Salvamos honrosísimas excepciones, en las que tenemos puestas nuestras esperanzas de acción católica en vuestras queridas Diócesis.

Pues bien: para esta acción es preciso utilizar todo recurso legal cuando el caso lo reclame; tener abiertas las puertas de quienes ejerzan autoridad o simple influencia ante ella para reclamar su concurso; no engendrar prejuicios ni celos de otro orden para trabajar tranquilamente en «nuestro orden», que es el del apostolado cristiano. Es necesario que no se desvirtúe nuestra acción a pretexto de supuestas resistencias; que lleguemos hasta donde puede llegarse en la acción de nuestro apostolado. Y para todo ello se requiere concordia, de pensamiento y voluntad, con la legítima autoridad en orden a los bienes fundamentales de la sociedad y a su ordenado régimen.

La autoridad es tan natural como la misma sociedad, porque ésta no puede constituirse ni desenvolverse sin aquella. Los individuos son como la materia de la sociedad; la autoridad es la forma que la vivifica y que la dirige y regula según sus fines. Por lo mismo, si la

sociedad, como toda naturaleza, viene de Dios, de El debe venir la autoridad, sin la que no se concibe la sociedad.

Pero vivimos bajo la nefasta influencia de las doctrinas de la falsa Reforma y de los llamados *Derechos del Hombre*, que suponen al hombre desgajado de Dios y a las sociedades constituidas con *entera independencia de El*. La sociedad, dicen, es el origen de la autoridad; por lo mismo, cada sociedad se organiza autónomamente y transfiere el poder que tiene de regirse a quienquiera que sea, que a nadie deberá dar cuenta del ejercicio de sus poderes más que a la sociedad de quien los ha recibido.

«Cuanto se alejen de la verdad estas opiniones, dice León XIII, acerca el gobierno de los Estados, lo dice la misma razón natural, porque la naturaleza misma enseña que toda potestad, cualquiera que sea y dondequiera que resida, proviene de su suprema y augustísima fuente, que es Dios; que el gobierno del pueblo, que dicen residir esencialmente en la muchedumbre sin respecto ninguno a Dios, aunque sirve a maravilla para halagar y encender las pasiones, no se apoya en razón alguna que merezca consideración, ni tiene en sí bastante fuerza para conservar la seguridad pública y el orden tranquilo de la sociedad. En verdad, con tales doctrinas, han llegado las cosas a punto que se tiene por muchos como legítimo el derecho de rebelión, pues ya prevalece la opinión de que, no siendo los gobernantes sino delegados que ejecutan la voluntad del pueblo, es necesario que todo se mude al compás de la voluntad de éste, no viéndose nunca el Estado libre del temor de disturbios y anarquías».

Se os ha hablado mucho de la soberanía nacional.

Se os ha dicho que el ejercicio del voto es la función de esta soberanía, por la cual cada ciudadano trasfiere la partícula de la soberanía que le corresponde, en este aglomerado social, al candidato que un día ejercerá en vuestro nombre el poder; que el pueblo se gobierna y se obedece a sí mismo cuando se deja regir por los poderes por él constituidos.

Estas frases halagadoras, que hacen del ciudadano rey de un momento, encierran un gravísimo error de orden filosófico y son un gran peligro para los mismos ciudadanos.

El error está en hacer arrancar la soberanía de la libertad individual, y no es así. Esta libertad no puede tener más que una función denominadora de quien ejercerá la autoridad, no por poder del pueblo, sino por poder de Dios. Es decir, que el pueblo es soberano en el sentido de que Dios ha depositado en él, juntamente

con la naturaleza social, la exigencia de una autoridad, con derecho que manifiesta con su voto, para determinar la forma de régimen social y el sujeto de la autoridad; pero el usufruto y el ejercicio de esta autoridad, no son del pueblo sino de Dios. «Si se trata de designar a aquellos que deben regir la cosa pública, esta designación podrá, en ciertos casos, dejarse a la elección y a las preferencias de una mayoría, sin que se oponga a ello la doctrina católica. Pero esta elección determina la persona del soberano, no confiere los derechos de la soberanía; ni se da con ella el mando, sino que se establece quien lo ha de ejercer» (1).

El peligro de esta tabula de la soberanía nacional está, primero, en que se vacía de Dios la sociedad, y se le suplanta con la autoridad de un hombre o de unos hombres que, por lo mismo que no ejercen el poder en nombre de Dios, podrán prescindir de El, de sus leyes, de su religión en el régimen del pueblo que se lo ha delegado para que se lo ejerza según su beneplácito y sus conveniencias. La soberanía nacional es, bajo este aspecto, el plano inclinado para llegar al completo ateísmo del Estado. Y en segundo lugar, este poder tan crudamente humano, cortado según las exigencias del mandato colectivo, llegará a ser fatalmente el instrumento de las grandes aberraciones sociales, destructoras del común bienestar, en orden a la misma autoridad, a la religión, a los sistemas económico-sociales. La autoridad de los poderes constituidos, que habrá recibido los poderes de una muchedumbre ya inficionada por el virus del error, devolverá a la muchedumbre, aumentados por la fuerza del poder público, de la legislación, de la presión, del juego interesado de los resortes del gobierno, los vicios que mancharon el origen del poder.

De esta influencia mutua de arriba abajo y de abajo arriba, especie de flujo y reflujo que en su movimiento acrecienta cada día los males sociales, hablaba sin duda León XIII cuando se quejaba de las hijuelas que al *derecho nuevo* le habían salido en la soberanía popular, y «cientemente, una licencia incipiente e ignora, que muchos califican sólo de libertad, todo lo cual ha traído esas plagas, que no lejos ejercen sus estragos, que se llaman *Comunismo*, *Socialismo* y *Nihilismo*, tremendos monstruos de la sociedad civil, que quisieran ahogarla entre sus fauces. Ved cuanto se esfuerzan por dilatar y extender el imperio de tantos males, y su color de favorecer los intereses de las muchedumbres, no escasas de lacerias, suscitan nuevas fuentes de calamidades. Estos sucesos, ni son desconocidos, ni se verifican muy lejos» (1). Tan cerca se verifican, que han tomado ya es-

(1) Enc. Quinquagesimo.

tado social entre nosotros. Las palabras de León XIII son ya viejas de cincuenta años, y la corriente ha hecho rápida su curso desolador.

Quedaos bien con estos principios, amados hijos nuestros, que son fundamentales para la conservación del orden social!

Todo poder viene de Dios, porque no hay poder, de ninguna clase, que no sea participación del poder del Autor de todas las cosas: *Auctoritas ab Auctore*.

Esta autoridad o potestad reside inmediatamente, no en ningún particular, sino en toda la colección de los hombres constituidos en sociedad. Cuando la sociedad se da a sí misma un rey, o una aristocracia, o una democracia o un poder mixto para que la gobierne, sea cual fuere la forma de designación, herencia, elección, compromiso, hay una transferencia de los poderes sociales al titular o titulares del poder; pero estos no lo ejercen por mandato del pueblo, sino como apoderados o mandatarios de Dios, fuente de todo poder, que no podrán utilizarlo sino en absoluta conformidad con la voluntad de Dios.

El Estado puede darse la forma de gobierno que mejor convenga a su temperamento, a su historia, a sus fines sociales; puede variarla cuando las circunstancias lo exijan; pero el poder público, considerado en su raíz, será siempre el mismo, es decir, algo que viene de Dios, sea un monarca o una república los que concreten la voluntad popular en cuanto a las instituciones de gobierno.

Toda colaboración de los ciudadanos a la obra del gobierno del Estado, el voto, administrativo o político, el consejo, la dirección de las multitudes en orden al ejercicio de los derechos políticos, el mismo ejercicio de la autoridad, todo debe estar como informado y dirigido por este principio elemental de que el poder viene de Dios, que no lo hay legítimo fuera de Dios, y que la ley y la voluntad de Dios, Autor del poder, y la ley divina, natural o positiva, que expresa y refleja esta suprema voluntad, imponen al poder las normas fuera de las cuales no hay más que abuso de poder.

Sobre nuestras cabezas ha estallado la tormenta político-social; ha derribado venerandas y seculares instituciones; ignoramos qué levantará o tronchará la fuerza de las nuevas cosas. Las revoluciones, se ha dicho, acaban en forma insospechada por quienes las comenzaron. Sólo Dios es el Señor de la historia, que se teje según su previsión y su voluntad santísima. Pero Dios es tan bueno, que ha querido condicionar los hechos a nuestra plegaria, dueño del mundo.

«Por la Iglesia», por el Estado español; «Por España y su religión»; por la compenetración íntima de las instituciones, de los poderes, de la actividad en ambos órdenes, el eclesiástico y el civil, el natural y el sobrenatural, el que trabaja para el bienestar de la tierra y el que labra las almas y las sociedades para el cielo.

Se ha dicho que se quiere hacer una España laica. Debe ser calumnia, porque no se concibe gobernante con sentido de tal que quiera hacer una España monástica, que tal es una sociedad sin religión; ni que quiera llevarnos fatalmente a la ruina, inevitable, la ha dicho Taine, en todo pueblo que se vuelva de espaldas al cristianismo.

En el uso de vuestros derechos políticos y en el de vuestra intervención en la cosa pública, cuando se trata de negocios puramente humanos, en los que, dice Pío XI, la Iglesia no se ingiere sin justa causa, podéis hacer abstracción de vuestra religión, aunque obrando siempre según vuestra conciencia cristiana; pero «cuando la política se acerca al altar», entonces la religión y la Iglesia, y el Papa que la representa, no están solamente en el derecho, sino en el deber de dar indicaciones y direcciones, «que las almas católicas tienen el derecho de reclamar y el deber de seguir».

«Es un enorme abuso de la religión», ha dicho León XIII, «arrastrar a la Iglesia a un partido y empeñarse en que ella preste la fuerza de su brazo para vencer a los adversarios políticos», pero es una gran cobardía, una detección vergonzosa y un escándalo que, por exigencias de partido, un católico preste su brazo a quienquiera que sea, en la forma que sea, para ayudar a la ruina de la más pequeña de las cosas santas de nuestra religión o de aquellas otras cosas, matrimonio, familia, escuela, instituciones sociales, etc., íntimamente trabadas con la religión.

Para no incurrir en este mal gravísimo—creemos que es una verdadera peste en nuestra patria,—evitad lo que se ha llamado con razón «desdoblamiento de la conciencia» del ciudadano: una conciencia para la religión y otra para la política; una para el fuero interno de la familia y otra para la pública palestra en que se ventilan

los negocios del Estado. No, amados diocesanos, esto no es lícito, porque no tenemos más que una conciencia, por lo mismo que no hay más que una regla de obrar y un camino para salvarnos.

Por lo mismo, en el ejercicio de vuestros derechos públicos procederéis siempre en armonía con vuestros deberes religiosos.

Reconocemos que es hoy difícil formarse conciencia y obrar bien en este punto. Ha logrado el ciudadano lo que antes no tenía, derechos civiles, políticos y sociales que forzosamente estarán trabados en su ejercicio con gravísimas cuestiones de carácter doctrinal. El pobre pueblo nada sabe de ello, y sus derechos, que tanto se voccean, se convierten en sus manos ignaras en arma terrible que puede inconscientemente esgrimirse contra la verdad y la moral. Sobre no abundar la ilustración en el pueblo, son enjambre los que le embaucan, y por todas partes acosan y apremian los directores de partidos políticos con programas disolventes, en religión como en el orden moral y económico social. De aquí la gran posibilidad de que podáis inferir agravio a vuestra religión. Es preciso, no sólo no obrar con inconsciencia, por borreguería, perdonadnos, como saltan uno tras otro los carneros de Paburgo; sino con la conciencia ilustrada por las verdades de la religión y por la verdadera ciencia en el orden social y político.

Deberes en el orden económico social.—Quisiéramos que especialmente os fijarais en vuestros deberes políticos en cuanto se relacionan con el orden económico social. Ya os dijimos en otra ocasión que los derechos políticos les importarían poco a las muchedumbres si tras ellos no vislumbraran el mejoramiento económico. Prueba de ello es que, en estas regiones, se cuentan por miles los desencantados por el hecho de que sus votos no se hayan ya traducido en pan, más abundante y mejor. No hacemos más que anotar el hecho y la verdad que encierra.

Por lo mismo que el hecho encierra una verdad, la de unas reivindicaciones que no hemos de calificar aquí, os exhortamos a todos, industriales y gente del campo, a que os acostumbreis a no separar de la religión y de la moral las cuestiones económicas de orden social, y menos en la forma en que hoy se plantean. Porque ya no se trata de una querrela de justicia, equidad y caridad dentro de la familia cristiana—y ya veis que por este concepto entran en juego los principios de la moral y del

derecho—sino que la lucha se ha establecido hoy entre la doctrina cristiana y las múltiples doctrinas anticristianas que forcejean para apoderarse de vuestras inteligencias y subvertir en nuestra conciencia social los conceptos tradicionales cristianos de propiedad, trabajo, riqueza, distribución, goce, etc.

Notad bien, amados hijos nuestros; en este terreno, que parece tan puramente de la tierra, no podéis prescindir de vuestra alma, de vuestra conciencia, de la religión y del cielo que esperáis. También «en el terreno económico corre peligro la salvación de las almas», ha dicho Benedicto XV (1). No sigáis a quienes os digan que en estas cuestiones se ventilan solamente intereses de estómago o de bolsillo. No; con ellas van involucradas delicadísimas cuestiones de orden moral y religioso. «Hay quienes piensan que la cuestión social es solamente una cuestión económica», escribe León XIII, mientras que, por el contrario, es innegable que ella es asimismo una cuestión moral y religiosa, que debe resolverse sobre todo siguiendo los dictámenes de la moral y de las enseñanzas de la religión» (2).

Firaos en este gravísimo punto. Se os han predicado estos tiempos doctrinas muy halagadoras; tan halagadoras como la pasión de tener o aumentar lo que se posee. Es preciso que sepáis discernir y respetar, en medio del diluvio de doctrinas, los eternos principios de la justicia, que ninguna doctrina, sistema o procedimiento tiene derecho a violar. Debeis tener el convencimiento íntimo de que estas cuestiones gravísimas, o no se resolverán dentro la paz y el bien de la comunidad, o deberán serlo dentro un plano de justicia social conforme con nuestro santo Evangelio.

Y como quiera que algunas de estas doctrinas, subversivas y absurdas, se han convertido en arma política y con la política se han aliado para convertirse en hechos sociales, guardaos de ejercer vuestros derechos políticos en forma que contribuyáis a una solución de injusticia social.

Y aún añadimos más. La santa Iglesia es la que ha hecho el esfuerzo máximo y de mayor eficacia para el establecimiento de la verdadera justicia social. De ella son las ideas y las instituciones que brindan hoy una esperanza más halagadora. Sus principios se han vaciado en los códigos de las naciones más progresivas. Lo que queda por hacer, que es mucho, no se debe a la ineficacia de su pensamiento y de sus métodos, sino a la incomprensión, a la pereza y al egoísmo humanos, plantas parasitarias que ahogan la vegetación más generosa.

(1) Carta al Obispo de Bergamo, 11 Marzo de 1920. — (2) Enc. Graves de com. inuit.

Más aún, y quisiéramos que os fijarais en ello. Todo lo que de mejor tienen las novísimas escuelas que traen revuelto al mundo, de la Iglesia lo recibieron, ya por la vía atmosférica del aire cristiano que hace veinte siglos respiran los pueblos civilizados, ya por el desenvolvimiento de ideas fundamentalmente cristianas cuya virtud seminal se encierra en el código divino de justicia y caridad que es nuestro santo Evangelio. Por esto no dudamos en afirmar que es un conato de suicidio social dejar la verdad por la utopía en estas vitalesimas cuestiones, desasirse de Dios y de su Hijo Jesucristo para lanzarse al vacío de los ensueños humanos.

El derecho del voto. — Y cuando tantas y tan graves cuestiones están y se pondrán sobre el tapete, y cuando va a arreglarse, con las futuras Cortes constituyentes, el amplio tablero nacional en que se ventilen, no podemos dejar de hablar del voto, de vuestro voto. Este, os decíamos en otra ocasión, representa un acto del pensamiento y de la voluntad, es decir, un acto de libertad. Por lo mismo, es un acto moral que, porque lo es, puede resultar un acto inmoral. No podemos respetar, por absurda, la libertad absoluta de la conciencia política, ni la doctrina de la supremacía de la conciencia como regla suprema de conducta personal. Vosotros tampoco la aceptáis. Sería hacer tabla rasa, en el fondo de vuestra alma, de los eternos principios de la justicia y de la religión, que es parte de ella, para entronizar en su lugar el capricho de cualquier ídolo. Heos aquí los principios que deben informar vuestra conciencia en materia de voto:

Debeis votar, es decir, que es deber de vuestra conciencia de cristianos y ciudadanos emitir vuestro voto. La razón es que todo hombre tiene el deber de concurrir al bien e impedir el mal, público o privado, según las propias fuerzas. Por los votos de los ciudadanos se eligen quienes querrán o no querrán, sabrán o no sabrán, tomentar el bien, la religión, la moral, la justicia, en todas las instituciones y en las formas complejas del gobierno del Estado. Los votos crean el instrumento que ha de gobernar o desgobernar la nación.

Hay circunstancias excepcionales que os eximen de la emisión del voto: un célebre moralista las reduce a tres, a saber: cuando es cierto el triunfo de los malos, aunque acudan los buenos a las urnas electorales; cuando es cierta la mayoría de los buenos que votarán bue-

nos diputados: cuando no hay concordia sobre los nombres de los candidatos, y se tiene la certeza de que los votos de los buenos andan dispersos (1). No tratamos aquí de otra «bondad» que la que se refiere a garantías que el candidato ofrezca en orden al bien común, que es el fin de la sociedad civil, y al bien espiritual, que es el fin de la sociedad religiosa. Es éste uno de los negocios, como tantos hay, que caen bajo la potestad «indirecta» de la Iglesia.

Al deber de votar va anejo el de hacerlo en favor de los buenos, en el sentido antedicho. Sobre este delicadísimo punto, que dejamos a la conciencia de cada cual, no hacemos más que tomar esta proposición de otro moralista eminente: «Excepción hecha de toda otra circunstancia, no sólo pecan aquellos que dan su sufragio a los malos, sino aquellos que, no acudiendo a las urnas, son causa de que sean los malos elegidos por los otros» (2).

Una aclaración importantísima: cuando dos partidos convienen en la idea religiosa y moral de la Iglesia, y lo mismo podemos decir de dos personas, de manera que la religión no es factor de diferenciación, que se dice ahora, entre ambos, poco importa el carácter político del candidato.

Subordinación a la jerarquía. — Por fin, como en todas las circunstancias en que se ventilan graves asuntos que puedan rozarse con el altar, en frase de Pío XI, se impone una subordinación sincera a la autoridad de la Iglesia en aquellos puntos que son de su jurisdicción, directa o indirecta. Nos, amados diocesanos, debemos una sujeción absoluta al Supremo Jerarca, Vicario de Jesucristo en el régimen espiritual del mundo. Vosotros, como cristianos, en virtud del mismo derecho que invocábamos para que obedecierais al poder civil, — «todo poder viene de Dios», — estais sujetos, en los puntos aludidos, a la dirección y autoridad de los Obispos «a quienes ha puesto el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios» (1), y por ellos lo estais a la cabeza visible, el Papa, y a la Cabeza invisible, Jesucristo, «Cabeza sobre toda la Iglesia» (2), que ha dado al Papa la plenitud de sus derechos en orden al régimen de nuestra sociedad sobre natural. Con ser gravísimos los deberes que teneis para con toda autoridad, son mas graves los que os ligan a la

(1) Card. Gennari: *Consultationi morali-canonico-liturgiche*, Vol. I, cons. 45.
— (2) Scavini, *Tratt. Mor.* I. I. n. 570.

potestad espiritual, porque su fin es más alto y más universal—así lo hemos demostrado en otra ocasión—, y porque ni indirectamente ha recibido de los hombres sus poderes, sino directamente de Dios: *Spiritus Sanctus posuit*.

9.- "Se dan facilidades al cardenal Segura para que pase la frontera"

"El Sol", 14 de mayo de 1931

SAN SEBASTIÁN 13 (5 t.).- Hoy han pasado para París en el sur-expreso D. Santiago Alba; en el expreso, el conde de Bugallal, y en el automóvil, el cardenal Segura.

El ministro de la Gobernación había telefoneado al gobernador anunciándole que hoy pasaría la frontera el cardenal primado y recomendándole que le facilitara cuanto necesitase. Efectivamente, a primera hora de la mañana llegó a San Sebastián el cardenal primado, y con objeto de ocultar su presencia a la ciudad, se dirigió a una finca de los alrededores, propiedad de D. Juan Olazábal, jefe nacional del partido integrista. En cuanto el gobernador conoció la presencia del cardenal primado se ofreció a facilitarle los pasaportes necesarios y le brindó los servicios del Comité de defensa de la República para evitar que se produjera el menor incidente.

También dio el gobernador las facilidades necesarias al hermano del cardenal las oportunas órdenes a la frontera para que se facilitara el tránsito del cardenal primado con toda facilidad, lo cual se hizo a las dos y cuarto de la tarde, sin que se produjeran incidentes.

Detalles del paso de la frontera

SAN SEBASTIÁN 14 (1,30 m.).- El Sr. Olazábal, jefe nacional del partido integrista, no tenía noticias del viaje del primado, pues a las ocho menos cuarto de la mañana había telefoneado desde su finca de Mundaiz, en las afueras de la ciudad, al Gobierno civil pidiendo algunos guardias, en vista de que en la finca se habían presentado dos personas, una de ellas con hábitos sacerdotales, que llamaban con insistencia inquietante. Se envió una pareja de guardias; pero antes de que llegaran volvió a llamar el Sr. Olazábal, con gran alarma, diciendo que se habían presentado dos personas más, también con hábitos sacerdotales, pretendiendo, con obstinación sospechosa, entrar en la finca.

A todo esto, un miembro del Comité de Defensa de la República se presentó también en el Gobierno para advertir que en la finca del jefe integrista debía de prepararse alguna reunión sospechosa. Por fin se averiguó que se trataba del primado, que, para pasar inadvertido, quería detenerse en casa de su amigo el Sr. Olazábal donde dijo misa. El cardenal vestía ropa talar sin distintivo especial. Tenía aire de fatiga y preocupación y estaba sin afeitarse.

El cardenal quiso comer en San Sebastián, porque le contraría la cocina francesa, y por esa razón no siguió en seguida a Francia.

El gobernador, al conocer su estancia en San Sebastián, le ofreció toda clase de facilidades para pasar la frontera, pues no traía pasaporte, invitándole a salir cuanto antes de España. A las dos y cuarto de la tarde, el cardenal, su hermano y un secretario llegaron a la frontera por la avenida de Francia, de Irún, donde se les acercaron varios policías y dos representantes del Comité de Defensa de la República, diciéndole uno de éstos:

- En virtud de órdenes del Poder civil republicano, puede usted pasar la frontera sin ninguna molestia ni dificultad.

El comisario añadió:

- Tenemos instrucciones concretas en ese sentido.

El cardenal sonrió con leve cortesía y dijo:

- Muchas gracias.

Avanzó sólo por el puente internacional, con la cabeza baja, y se detuvo al llegar a la Aduana francesa, donde se le incorporaron su hermano y el secretario. Después los tres siguieron por la carretera hasta el Hotel Midi, donde inmediatamente fueron a visitarle varios españoles emigrados. Luego de descansar en el hotel fue a la estación, donde muchas señoras le besaron el anillo llorando.

A las siete de la tarde salió para Lourdes, desde donde seguirá a Roma (Febus).

10.- Declaración colectiva del episcopado español.

9 de mayo de 1931, BDE de Toledo, año 87, 16 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 153-155.

Recogido en IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, págs. 130-133.

1. Deber estrictísimo del cargo pastoral es el que a todos los obispos de la Iglesia católica impone el canon 336 del Código vigente de Derecho Canónico en el que se establece «que los prelados han de vigilar para que no se introduzcan abusos en la disciplina eclesiástica, y que deben procurar que se conserve la pureza de la fe y de las costumbres en el clero y en el pueblo cristiano, y que en las escuelas de los niños y de los jóvenes se dé la instrucción y educación al tenor de los principios de la religión católica».

El cumplimiento de este deber sacratísimo ha movido a los metropolitanos españoles, al reunirse en las actuales circunstancias para estudiar serenamente la situación creada a la Iglesia española con el nuevo estado de cosas, a dictar, de acuerdo con el sentir del Episcopado, la actual declaración colectiva pastoral que pueda servir de norma común de criterio y de acción a los católicos españoles.

2. Apartados en absoluto del campo de las contiendas políticas de partido, según la disciplina eclesiástica, atienden únicamente al bienestar espiritual de los fieles que les están confiados y a la defensa de los sacrosantos e inalienables derechos de la Iglesia, que bajo juramento se obligaron a mantener incólumes el día de su consagración episcopal.

3. Particularmente todos y cada uno de los prelados españoles han recordado ya a los fieles los deberes que les ligan con las autoridades constituidas y la obligación que les incumbe de cooperar al bien común y al mantenimiento del orden social. Los metropolitanos españoles, reunidos, de nuevo ratifican plenamente estas manifestaciones de los prelados, en la confianza de que las autoridades respetarán los derechos de la Iglesia y de los católicos en una nación en la que la casi totalidad de la población profesa la religión católica.

4. En estos momentos en los que la nación ha de manifestar su voluntad en las ya próximas Cortes Constituyentes, no cumplirían los prelados con una obligación gravísima de su cargo si no recordasen a los católicos españoles, juntamente con el deber ciudadano de conciencia de respetar y obedecer a las autoridades constituidas, otros apremiantísimos deberes ciudadanos de conciencia que en estos momentos trascendentales para la Patria y para la Iglesia española pesan sobre todos los católicos españoles respecto de la nación. Al recordar los metropolitanos estos deberes de conciencia, no hacen sino obrar de plenísima conformidad con la doctrina de la Iglesia, tantas veces proclamada en recientes documentos emanados de la Cátedra de la verdad.

5. Los católicos españoles tienen en la actualidad el deber estrictísimo de tomar toda la parte activa que puedan, según las leyes, en las elecciones que se avecinan para las Cortes Constituyentes.

6. Tienen asimismo el deber, son palabras de Pío X, una vez que se trata de gravísimos intereses de la Religión y de la Patria, de unirse circunstancialmente para una acción común: y esta unión la juzgaba el sumo pontífice Pío X «necesaria e indispensable», y agregaba que es deber imprescindible de todo católico adherirse prontamente a tal unión o acción práctica común, sea cual fuere el partido político a que pertenece.

Es, pues, apremiante en la actualidad el que los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de una manera seria y eficaz a fin de conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social.

7. Los prelados españoles, en su deseo sincero de no crear dificultades al Gobierno provisional, han callado hasta el presente con la esperanza de que serían por él íntegramente respetados los derechos de que por tantos títulos venía gozando la Iglesia en España. Mas su silencio pudiera ya ser interpretado fácilmente como aquiescencia a medidas del poder público y a hechos gravísimos que han producido penosísima impresión a los católicos por lesionar derechos suyos preciadísimos, por los que los prelados tienen el deber de velar, ya que pertenecen al patrimonio de la fe y de las costumbres cristianas del pueblo español.

8. Al denunciar con honda amargura estas medidas y estos hechos, sobre los que los metropolitanos dirigirán una exposición al señor presidente del Gobierno provisional, abrigan todavía la esperanza de que el Gobierno, conforme a los propósitos, que tantas veces ha manifestado, de paz y de concordia, nada intentará ni permitirá respecto a la Iglesia y a sus derechos sin ponerse de acuerdo con la Santa Sede.

Son tiempos los actuales en los cuales se hace preciso recurrir al Corazón Sacratísimo de Jesús por medio de su Inmaculada Madre con constantes y ferventísimas oraciones, que recaben las gracias que tanto se necesitan en el actual momento histórico para la prosperidad espiritual y material de la Patria.

Toledo, 9 de mayo de 1931.

11.- "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (Nota del gobierno).

S. I. *BDE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 185-186.

«Con motivo de la publicación de la Pastoral que el Primado de Toledo dirigió a los otros Prelados, con ocasión de la proclamación de la República, el Gobierno, estimando peligrosa la permanencia del Cardenal en España, solicitó de la Santa Sede la remoción de D. Pedro Segura de la Silla Metropolitana de Toledo.

A poco de ser cursada esta nota del Gobierno, abandonó el Cardenal, de modo espontáneo, el territorio español, dirigiéndose a Roma y regresando algunos días después a España sin ponerlo previamente en conocimiento de ninguna autoridad civil ni eclesiástica.

Entró el Cardenal por el paso de Roncesvalles la noche del día 11, y durante tres días permaneció oculto, ignorando su paradero el Gobierno. Esperaba éste recibir la contestación de la Santa Sede a su nota para adoptar la resolución que estimara pertinente; mas al tener noticia de que el Cardenal, saliendo, al fin, del incógnito, había convocado en Guadalupe una reunión de Párrocos y otras dignidades eclesiásticas para el próximo domingo, ou encad en rogale que abandonara de nuevo España, dándole, claro es, las máximas facilidades para ello.

La resistencia que el Cardenal opuso en los primeros momentos a cumplir la orden del Gobierno hizo un tanto enojosa y lenta la tramitación de su cumplimiento, mas al fin pudo ser acompañado el Cardenal hasta la frontera francesa, guardando a su persona y a su dignidad las consideraciones debidas.

En tanto no reciba el Gobierno la contestación de la Santa Sede a la nota pendiente, no quiere que se perturbe la paz espiritual del país con la actuación personal en él de quien viene dando muestras reiteradas y públicas de hostilidad al régimen, una de las cuales es la forma excesivamente discreta, poco adecuada a la jerarquía de la primera dignidad de la Iglesia española en que ha regresado a España y permanecido en ella estos últimos días.

Al adoptar el Gobierno la resolución que ayer adoptó está seguro de haber prestado un servicio a la paz pública, y otro no menor a los altos intereses espirituales de la Iglesia.»

12. - S. r. "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (17 de junio de 1931. Carta del obispo auxiliar de Toledo al presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora).

BOE de Toledo, año 37, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 189-191.

No sólo por el afecto y veneración que siento hacia la persona del Emmo. Sr. Cardenal Primado, sino también en cumplimiento de un deber que me impone mi cargo de Vicario General de este Arzobispado de Toledo, me veo en la dolorosa precisión de acudir ante V. E. en sentida queja por la detención y expulsión del Emmo. y Rvmo. Señor Cardenal D. Pedro Segura y Sáenz, esperando de la rectitud de Vuecencia que dará satisfacción a mis deseos, compartidos por todos los católicos de esta Archidiócesis.

Es caso tan extraordinario que se expulse a un ciudadano de su propia patria, obligándole a solicitar como favor en tierra forastera un lugar de asilo de que en la suya se le priva, que yo no sé si puede haber razón legal, por grave que se la suponga, que en algún caso lo justifique, pues aun a los delinquentes a quienes la ley impone la pena de destierro, no se les obliga a pasar las fronteras de su patria.

Trátase, además, en este caso de un Prelado que tiene el deber de gobernar una Diócesis y que fué detenido dentro de ella, precisamente cuando, al amparo de un derecho que la Ley le reconoce y de la inmunidad que los Sagrados Cánones le conceden, iba a ejercer un acto de su ministerio pastoral.

Trátase—para no alegar otros títulos—de un Cardenal de la Santa Iglesia Romana, del Director Pontificio de la Acción Católica en España, de la primera dignidad de la Iglesia española, a quien se detiene por medio de la Guardia civil en una carretera; se le incomunica por espacio de un día; se le recluye durante seis horas en una habitación del Gobierno civil de Guadalajara, sin comodidad alguna, sin medicamento a su delicado estado de salud, bajo la inmediata custodia y vigilancia de la Guardia civil, y se le comunican órdenes per conducto de empleados subalternos, sin que el Sr. Gobernador se digne saludar siquiera al que, aun detenido, no deja de ser, cuando menos, la autoridad religiosa superior de la ciudad de Guadalajara.

Al regresar el Emmo. Sr. Cardenal Primado a España, donde tiene una Diócesis que gobernar y sagradas obligaciones que cumplir, no quebrantó órdenes del Gobierno, pues ninguna había recibido. Usó de un derecho que nadie puede negarle. En la frontera mostró su pasaporte; en Madrid residió en su morada habitual, y, después de brevísimo descanso, reanudó su ministerio pastoral, encaminándose para ello a la ciudad de Guadalajara, perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de este Arzobispado.

Ni era preciso que el Sr. Cardenal Primado diese noticia previa de su regreso a ninguna autoridad civil, ni puede afirmarse que no se lo comunicase a ninguna autoridad eclesiástica, por cuanto tenía conocimiento de su viaje el único que en la Jerarquía de la Iglesia es superior a los Cardenales.

No regresó, por tanto, en «forma excesivamente discreta» y, en todo caso, si en la discreción pudiera haber exceso, justificado estaba, no por desconfianza en la rectitud del Gobierno, sino por violentas campañas, de cuyo apasionamiento tiene bien triste experiencia el Sr. Cardenal, y que en estos días, tomando ocasión de la detención de Su Eucia. Reverendísima, han llegado hasta excitar al atentado contra su sagrada persona.

No ha de extrañar, pues, V. E. que los católicos hayamos sentido honda amargura y expresemos doloridos nuestra protesta al ver al Emin. Sr. Cardenal Primado detenido como un vulgar deliniente, sometido a estrecha vigilancia, expulsado del territorio nacional; y esto, sin advertencia alguna previa, sin expresarlo las causas de tan grave resolución, sin concederle siquiera un breve plazo para proveerse de lo más preciso y despedirse de su anciana madre; sin más trámite que una orden de cuatro líneas, suscrita por el Sr. Gobernador civil de Guadaluajara y ejecutada por comisarios de Policía.

Preciso parece que el Gobierno provisional de la República haya tenido gravísimos y muy urgentes motivos para proceder de esta manera; sobre todo, cuando, estando pendiente una reclamación hecha por el Gobierno ante la Santa Sede, parecía obligado el abstenerse de obrar por cuenta propia, en espera de un acuerdo entre ambas potestades; mas esas gravísimas y urgentes razones no quedan ciertamente aclaradas en la nota oficiosa que hoy ha dado a la Prensa el Sr. Ministro de la Gobernación.

La carta pastoral que el Cardenal Primado dirigió, no «a los otros Prelados», como en la nota se dice, sino «al Clero y fieles del Arzobispado de Toledo», según se expresa en la misma pastoral, no justifica en modo alguno que se estime «peligrosa la permanencia del Cardenal en España». No un peligro, sino sostén no despreciable del orden y de la paz es quien advierte a sus diocesanos que tienen el deber de respetar y obedecer a los Poderes constituidos y expresamente declara que la Iglesia, atenta a sus altísimos fines, no tiene predilección por una forma determinada de Gobierno, y respeta, por tanto, la que la nación se haya dado a sí misma. No es éste, en verdad, el estilo de los promotores del desorden y de las revueltas.

Y si el Sr. Cardenal ha dado «muestras reiteradas y públicas de hostilidad al régimen, justo hubiera sido enumerarlas, siquiera para que la opinión viese la proporción entre la gravedad de la falta y el rigor de la sanción decretada por el Gobierno; porque mencionar solamente como una de esas públicas muestras de hostilidad al régimen «la forma excesivamente discreta» en que el Sr. Cardenal regresó a España, es ocasionado a que, por la nimiedad de ésta que se cita, se juzgue de las otras que se callan.

A falta de pruebas que justifiquen la expulsión del Eminentísimo Sr. Cardenal Primado, séame permitido, Excmo. Señor, alegar algunos indicios de que en ningún caso será él quien con su «actuación personal perturbe la paz del país». Las claras luces de su inteligencia, su rectitud de intención, su prudencia exquisita, su adhesión incondi-

cional a las enseñanzas y normas de la Santa Sede y su encendido amor a España son prenda segura de su amor al orden y a la concordia. Su pasado responde del presente y del porvenir. Sus veinticinco años de vida sacerdotal inmacutada, llena de apostólicas actividades y de heroicas abnegaciones, consagrada por entero a promover la paz espiritual de las almas, que es el fundamento primero de la paz social, son garantía cierta de que será siempre cooperador eficientísimo de toda obra de pacificación y de toda empresa de verdadero patriotismo.

Por todo lo cual, el que suscribe, en nombre propio e interpretando el sentir unánime del Clero y fieles del Arzobispado, espera que Vuecencia, en bien de los altos intereses de la Iglesia y en bien asimismo de la paz de la Nación, que en estas horas de grave trascendencia necesita más que nunca la concordia de todos los españoles, someta a nuevo estudio del Gobierno Provisional las medidas tomadas contra el Cardenal Primado, y que, en mérito de las razones expuestas, rectifique la orden de expulsión, permitiendo al venerable Prelado, a quien el destierro tiene alejado de su patria, volver, rodeado del prestigio debido a su dignidad y a sus virtudes, a continuar su apostólico ministerio en esta su amada Archidiócesis.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Toledo, 17 de junio de 1931.

13. - S. f. "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (15 de junio de 1931. Carta del cardenal Segura al presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora)

BOE de Toledo, año 37, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 131-133.

«Excelentísimo Señor: Recibo en este momento del Gobierno civil de la provincia de Guadalajara una comunicación fechada en 15 de junio de 1931, que dice textualmente: «De orden del Gobierno provisional de la República española, sirvase ponerse inmediatamente en marcha hacia la frontera de Irún. Dios guarde a Su Eminencia muchos años. Guadalajara, 15 de junio de 1931.—El Gobernador civil, José Luis Trejo (Rubricado). Hay un sello que dice: Gobierno civil de la provincia de Guadalajara.—Emmo. Sr. Cardenal Primado, D. Pedro Segura y Sáenz.»

Creo que no me negará el Gobierno provisional, que Vuestra Excelencia preside, el derecho de exposición respecto al cumplimiento de una orden de tan extraordinaria importancia, no sólo para mí, sino para la Iglesia española. No ya en calidad de Cardenal Primado de España, ni de Arzobispo de Toledo, ni de Director Pontificio de la Acción Católica, ni de Comisario general de la Santa Cruzada, sino aun como simple ciudadano español, me creo asistido del derecho ante una orden del Gobierno provisional a que se me demuestren los motivos por los cuales el Gobierno ha decretado mi expulsión de España, y éste es el alcance que tiene la orden trasladada, si bien no lo expresa con claridad. Si se demuestra judicialmente o extrajudicialmente o que soy responsable de infracción de cualquiera de las leyes por que se rige la República española, o que mi presencia y actuación en España, concretada al cumplimiento de mis deberes, es causa justificada de perturbaciones del orden público, que el Gobierno ha cuenta con medios para reprimir, o que previamente se me ha comunicado en forma un decreto de expulsión que haya sido infringido, contando siempre con la autorización de la Santa Sede, por cuya voluntad expresa he regresado a mi Diócesis, cumpliré con fidelidad la orden que se me intime. Mas si esto no se demuestra, me creo asistido por todos los derechos, natural, civil y eclesiástico, a tenor de la Constitución vigente y del Concordato, para mantenerme en mi puesto cumpliendo con mi deber pastoral. Es más: me veo obligado a ello por deberes sacratísimos de cuyo cumplimiento el Gobierno provisional no puede en modo alguno relevarme sin autorización expresa de la Santa Sede.

Sólo mediante la fuerza y la violencia podrá en este caso ser obligado a abandonar mi Diócesis, cosa que ruego al Gobierno me permita hacer constar mediante acta notarial si, como no espero de la rectitud de conciencia de los miembros que componen el Gobierno provisional, se diera en esta forma la orden de mi expulsión.

Me ha de permitir V. E. alegar como derecho de mi actual permanencia en España, la noticia, que por conducto enteramente fidedigno llegó hasta mí antes de partir de Roma, de que se había decretado oficialmente que el Gobierno no había tenido parte en mi salida anterior de España, y que no había obstáculo, consiguientemente, en que pudiera regresar.

Creo reconocerá V. E. las circunstancias verdaderamente agravantes de que viene rodeada la intimación de la orden trasladada del Gobierno provisional de la República española, que quiero poner en su conocimiento para esclarecimiento total de los hechos mediante las notas adjuntas que se transcriben:

•Anunciada previamente por teléfono la visita oficial a las Religiosas Adoratrices del Convento de Guadalajara. Citados, para tratar, al mismo tiempo, de asuntos de gobierno eclesiástico, los Párrocos de la capital de Guadalajara, me dirigía, en automóvil, a esta ciudad de mi Archidiócesis cuando, al llegar a las inmediaciones de la capital, fui detenido por una pareja de la Guardia civil, una vez comprobado que se trataba de la persona del Cardenal Arzobispo de Toledo. Montó la pareja en el automóvil, que se encontraba, en primer lugar, a la Comandancia de la Guardia civil, y, desde la misma, penetrando en el automóvil el sargento encargado de las oficinas de la Comandancia, fui conducido a la Comisaría de Vigilancia, establecida en la planta baja del Gobierno civil. Allí se requirieron los documentos de identidad de mis compañeros, y, a continuación, después de tomadas las notas para el atestado, se hizo una inspección personal de los papeles que llevaba.

Permanecimos custodiados en la habitación por la pareja de la Guardia civil de servicio. En vista de que el tiempo transcurría y se impedía el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica dentro de mi diócesis, manifesté al señor comisario lo siguiente:

•Haga saber al señor Gobernador civil que vengo a Guadalajara en cumplimiento de un ministerio pastoral, a practicar visita canónica en el convento de Religiosas Adoratrices de esta ciudad, y que si violentamente se me impide el ejercicio de mi ministerio, aparte de las penas canónicas en que, desde luego, incurrirán los que pusieren impedimento al libre ejercicio de la administración eclesiástica, elevaré ante quien corresponda la más enérgica protesta, que desde ahora formulo, por la violación de la inmunidad personal mediante una detención injustificada por la fuerza pública.

Por mandato del Gobernador, el comisario de Policía me intimó de palabra, ante la pareja de la Guardia civil, mis familiares y acompañantes, la orden expresa del Gobierno de que cuanto antes eligiese la frontera por la que inmediatamente debía salir de España, para partir desde este momento, con opción de llevar a uno de mis acompañantes, habiendo de venir conmigo el mismo comisario de Policía, a lo que respondí que estaba en España en uso de perfectísimo derecho, según

declaración hecha en nota diplomática por la Nunciatura Apostólica a la Secretaría de Estado. Que necesitaba que la orden se me comunicase por escrito, y que para ausentarme de España era preciso una autorización expresa de la Santa Sede, con cuya aprobación me encuentro en mi diócesis, protestando de la forma en que se había realizado la detención por orden del Gobierno; que me había mantenido custodiado por una pareja de la Guardia civil de servicio en la sala común de la Comisaría, en la que llevaba detenido e incomunicado más de dos horas. Que si por la fuerza bruta se me arrastraba de España, el Gobierno asumiría la responsabilidad y yo formularía las oportunas reclamaciones donde procediera.

El señor comisario dijo que daría cuenta al señor Gobernador, quien en las dos horas y media de detención, no se dignó venir a comunicar personalmente con el Cardenal Primado de España, reducido a la condición de un preso vulgar, sin que se haya demostrado por nadie en ninguna ocasión el menor motivo de esta medida, ni haya recibido más requerimiento que la intimación hecha en la noche del 12 de mayo verbalmente por una persona particular, en la que se me ratificó «que el Gobierno no garantizaba mi vida en España por espacio de media hora».

Hay otros motivos que dificultan el que se cumplimente con la prontitud que se pide la orden del Gobierno provisional, en el caso de ser mantenida. Como de la relación anterior se desprende, vine totalmente desprovisto de todo, ya que se trataba de una permanencia de tres horas fuera de casa. Carezco absolutamente de todo: de dinero, de ropa, de medicinas que reclama mi estado de salud y hasta de breviario para el rezo del oficio divino... Como no se me permite terminar esta exposición, ya que se recurre a la violencia, ruego a V. E. la tenga por presentada y resuelva conforme proceda.

Guadalupe 15 de junio de 1931. -- Excmo. Sr. Presidente del Gobierno provisional de la República española.

- 14.- "Expulsión de España de Su Eminencia Reverendísima y exposición de hechos". (Carta del presidente del Gobierno provisional, Alcalá Zamora, de 17 de junio de 1931 al cardenal Segura).

S. I. *BOE de Toledo*, año 87, 25 de junio de 1932, núm. 12, págs. 190-193.

Madrid, 17 de junio de 1931.

Excelentísimo señor: Tengo el honor y, por la ocasión y tema, el sentimiento de contestar la comunicación que, lechada en Guadalajara el día 15 de los corrientes, se ha servido V. E. dirigirme. Mi respuesta será respetuosa, serena y firme, conciliando, sin dificultad, todas las deferencias que deseo guardar y todos los deberes que sobre mí pesan.

Lamento con plena sinceridad, y la expresión de mi sentir refleja no ya un criterio personal, sino el del conjunto del Gobierno, que no haya sido posible, respecto de V. E., mantener la relación normal que por fortuna venimos sosteniendo con la casi totalidad del Episcopado español. Para ello ha bastado con un Gobierno liberal, comprensivo y ecuanime, que, sin perjuicio del derecho de cada Prelado para el comentario o la crítica respetuosa de nuestras determinaciones, prestara acatamiento al Poder constituido, sin hostilidad injustificada y viva contra el mismo, ni añoranzas suprimibles y dañosas respecto del régimen derribado por la voluntad nacional.

Cierto es, excelentísimo señor, que su primer viaje estuvo exento en la iniciativa de toda presión por parte del Gobierno español, obedeciendo, sin duda, al convencimiento personal y tardío de V. E. acerca de la difícil situación que su Pastoral había creado; pero no es menos cierto que en nuestras notas al digno señor representante de la Santa Sede expusimos el insistente deseo y la fundada esperanza de que su ausencia se prolongara. Esperábamos y queríamos, con todos los respetos, semejante alejamiento, por ser la situación de hecho y de trámite adecuada a las negociaciones que con la Santa Sede habíamos iniciado en cuanto afecta a V. E., y porque también lo aconsejaba la inquietud del espíritu público, lamentablemente perturbado. Sin haber terminado este desasosiego ni aquella negociación, jamás podíamos esperar un regreso, del que ninguna advertencia tuvimos, y menos aún podíamos calcularlo a los pocos días de habernos dirigido V. E., fechándola en Roma, su protesta contra distintas determinaciones del Poder público. En relación con ese otro documento, prescindiendo de que algunos de los motivos de protesta eran conjetura o rumor (de todos ellos, sea cual fuere el criterio de partidar o tendencia sobre el fondo o solución, se reconocen unánimemente en el derecho político moderno como perteneciente a la esfera jurisdiccional del mismo), y de que en algún pequeño problema, como el relativo a las Órdenes militares, sólo se trata en la vida contemporánea de exterioridades honoríficas y debilidades aristocráticas sin la más remota conexión actual con la espiritualidad religiosa. Sin ánimo de mantener sobre ello, ni sobre nada, una polémica, de la que me aparta el sentido de la oportunidad y del respeto, debo significar a V. E. que tal documento, posterior en cerca de un mes a la reunión de los Sres. Prelatos Metropolitanos, cuyos acuerdos nos reflejaron fechados en Roma, hacía suponer lógicamente la permanencia del Sr. Cardenal en la Ciudad Eterna.

Sobre haber constituido su regreso una sorpresa, fué también inquietante para el Gobierno que personalidad tan destacada, de tanto relieve y viso, no se supiera durante muchas horas en dónde se encontraba, ni se conociera en forma alguna los propósitos de su estancia tan recatada, apareciendo en forma intranquilizadora, que latibaba eco en las alarmas y protestas deplorablemente renovadas de la opinión.

Pregunto V. E. si las determinaciones del Gobierno están fundadas en consideraciones de orden público o en ataque, por su parte, a las leyes de la República. Siempre, con el debido respeto, habré de contestarle que el peligro de aquel orden se vió patente desde su aludida Pastoral, y resurgió de nuevo con su presencia, a tal punto que esas inquietudes creo pesarian en su ánimo, después de escrita la comunicación, para dar asentimiento voluntario a la indicación atenta que, primero, juzgo no debía oír. En cuanto a las leyes de la República, la raíz y total asiento de su eficacia está en el respeto a la institución misma, y cuando a ésta se ataca, entonces sus preceptos quedan alcanzados con el quebranto o riesgo consiguiente y proporcionado a la autoridad de quien expresa su discrepancia y su oposición.

Tengo, afortunadamente, por seguro que en su viaje encontraría todas las facilidades secundarias a que aludo, así como celebro muy sinceramente se mantuviera el estado satisfactorio de salud, que le desco, y que los facultativos comprobaron. Abigarrame también las atenciones, que con noble rectitud proclama, por parte de la Guardia civil y Policía, y puedo asegurarle que semejantes miramientos, lejos de significar contraste, que parece insinuar, con la actitud del Gobierno, son la obediencia debida y guardada a las reiteradas instrucciones del mismo, que siempre, y muy señaladamente en relación con V. E., procura, aun en situaciones delicadas y difíciles, que quiso evitar, la conciliación entre los respetos que la persona y la jerarquía inspiran y la firmeza con que ha de proceder en la defensa y guarda transitoria de un Poder supremo que, libre de perturbaciones, ha de entregar a la representación del país.

No extrañará tampoco a V. E. que el Sr. Gobernador civil de Guadalajara, quien nos transmite su escrito con toda eficacia y deferencia, no se pusiera en comunicación directa con el Sr. Cardenal. Tal vez pesara en el ánimo de aquella autoridad civil la impresión de extrañeza que a todos nos produjo el hecho de que V. E. mostrara su desvío extremado para el contacto con toda autoridad civil de la República, incluso con el Sr. Gobernador civil de Toledo, persona de religiosidad manifiesta, ortodoxia, intachable, templanza mostrada y predisposición, no correspondida, a facilitar, del modo más cordial y considerado, la comunicación del Gobierno de la República con la primera autoridad eclesiástica de España.

Desco y querría poder añadir que espero, excelentísimo señor, reflexiones de su elevado espíritu, conducentes a dar de nuevo carácter voluntario, como creo que al fin lo ha tenido, a esta su segunda ausencia, y, sobre todo, aquietamiento al pueblo español, en bien del orden, que afecta a todos los ciudadanos, y con provecho para la Iglesia, que interesa, cuando menos, a todos los católicos.

Respetuosamente se despide de V. E. su atento s. s., q. b. s. a. p., Niceto Alcalá Zamora.

15. - "Al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno provisional".

25 de junio de 1931, *BOE de Orense*, año 98, 27 de junio de 1931, núm. 13, págs. 216-218.

EXCMO. SEÑOR:

El que suscribo, vuestro último servidor y capellán, Obispo indigulísimo de Orense, en su nombre y en el de todo el Clero diocesano, asociaciones y grupos de caridad, y de todos los verdaderos católicos, que de seguro constituyen la inmensa mayoría de esta Orensana provincia, unidos desde luego como no podía menos de ser en sentimientos de Fe, Religión, Libertad y Justicia, generadores de todo lo grande, excepcional y progresivo de nuestra gloriosísima historia, voso, bien a pesar suyo, en la muy triste y dura precisión de acudir a V. E., confiando en ser oído, para lamentar a la vez que exponer solidariamente la a su juicio injustificada anticanónica expulsión o expatriación violenta impuesta y requerida por el sectarismo, del por tantos títulos Venerable, varón santísimo y proclamo modelo de patriarcas y preládos, el Excmo. Cardenal Prímado de las Españas, y de los Rvd. nos. Obispos de Vitoria y Málaga, expatriación que habrá de impedir, contra lo que sin duda se pretende, la simpatía y arraigo de la advenida República por ellos noblemente reconocida.

Estimulado, Excmo. Señor, forzado por el mismo sentir y cristiano celo que a ellos a esta aceptación recomendada a sus fieles les ha movido en bien de la paz común, debo asociarme y me asocio a la unánime clamorosa protesta de esta católica España herida, ofendida ahora por manosa extraña e inencomunal cual jamás lo había sido en su religiosidad ferviente, y pido asimismo, igual que todos los buenos piden, la revocación, anulación y reterma de semejante decreto, y aún de todos los demás decretos inspirados y repletos de idénticos odios sectarios a Jesucristo y su Iglesia, decretos a todas luces improcedentes por ser a parte de otras razones, anticonstitucionales, violadores del Concordato vigente con la Santa Sede y audaces retos de la fuerza a la conciencia católica de los españoles.

1.º Por haber introducido con especiales derechos y absurdas garantías la plena libertad de falsos cultos con amplia difusión y propagandas de todo linaje de heregias, sacrilegios y ateísmos.

2.º Por haber facilitado y amparado la separación, legal destierro de todo signo religioso y enseñanza catequística de las escuelas públicas a voluntad de cualquier bolchevique que pretenda convertir a España en una Rusia soviética, y si tiene lujos o nielos, los quiera a ellos y a todos los en España nacidos sin religión ni patria.

3.º Por haber roto de un golpe con visible desprecio de la Fe todos los sagrados vínculos tradicionales de armonía entre la Iglesia y el Estado, prohibiendo la asistencia oficial de las autoridades civiles militares a los actos de Culto.

4.º Por desamparar y aun amenazar de represión y despojo a las Ordenes religiosas en que oran, se santifican y trabajan españoles, incluidas las que han donado a España el nuevo mundo de América.

5.º Por la protección, requirimientos y halagos que más o menos descaradamente se ofrecen a todo linaje de laicismos. Lo cual equivale, claro está, a pretender hacer de España, resueltamente, en vez de la gloriosísima nación católica que hasta ahora lo ha sido, una república de cuño soviético incompatible de todo punto con lo que fué y es y quiero ser vida cristiana, la generadora de virtudes, amor sobrenatural que afianza la paz y reconcilia enemigas por la destrucción de odios y humanas querellas, y luz y Evangelio esplendoroso, divina y soberanamente civilizador de Cristo.

Si, Excmo. Sr. Presidente, esto fué y esto quiere ser España en la actual República; y por eso en contra de aquellos decretos que niegan implícitamente la divina autoridad recibida de Cristo Dios y dada a los Obispos para que éstos bajo la sola y única suprema del Papa enseñen, como hasta ahora enseñaron los que desterrados fueron y en destierro viven, doctrinas de fe y obediencia, afianzadoras de la misma República; contra aquellas medidas que no han podido ser de cristiano amor y social concordia, pues que en nada respetan los más firmes amores y arraigadísimas creencias, tradiciones, leyes y cultos de esta siempre católica nación, necesita protestar y protesta con todos los naturales respetos y permitidas energías, y unido según queda dicho a grito unánime de España, la siempre católica y fiel, pide y espera la revocación inmediata de tales acuerdos, en su nombre y en el de todos sus sacerdotes y fieles diócesanos.

EL OBISPO DE ORENSE.

16. - Don Miguel Maura funda el partido conservador de la República: ~ Texto taquigráfico del discurso pronunciado anteayer por el ex-ministro de la Gobernación.

"El Sol", 12 de enero de 1931.

Los incendios de mayo ~ La quema de conventos.

..... no acepto la (responsabilidad) de la quema de los conventos; y no sólo no la acepto, sino que no guardo silencio ni un minuto más, por tres razones: la primera, porque a tiempo me reservé con mis compañeros de Gobierno el derecho para explicar la verdad cuando al explicarla no causare un daño a la República (Muy bien); la segunda, porque los hombres públicos no podemos administrar nuestro silencio liberrimamente, pues nos debemos a nuestra significación, que es algo así como un pasaporte para circular honrada y libremente por la vida pública. (Muy bien. Aplausos.) Con ese pasaporte inspiramos o no confianza a quienes nos sigan, y cuando en ese pasaporte cae una mancha injustamente tenemos el deber de borrarla, porque si no borramos defraudamos a los que han puesto en nosotros sus esperanzas. (Muy bien, muy bien.) Y la tercera razón es ésta: porque yo estoy siendo acusado día tras día por las extremas derechas de ser el responsable de la quema de los conventos; por lo menos, de haberla consentido, y yo no he oído todavía la voz de ninguno de mis compañeros de Gobierno alzarse para decir que eso es una injusticia. (Aplausos.)

Yo juego noblemente, y en un juego noble me parece que es regla elemental que ese silencio obstinado me exime a mí de la obligación de seguir guardándolo. Por eso hablo.

Y vayan por delante dos advertencias: la primera, que yo me limitaré a narrar los hechos sin una crítica, sin una censura, sin un nombre, sin una acusación; la segunda, que yo sé hasta qué punto en España es habitual polarizar en un hecho en una fecha la atención de la política. Alrededor del año 1909 vivió España polarizada catorce años. Pues bien: eso conmigo no reza. Voy a hablar de este tema por única vez en mi vida, y no admito

polémica sobre dicho asunto después del día de hoy ni por la derecha ni por la izquierda, y nadie que sea amigo mío saldrá a mi defensa si se intenta todavía agredirme.

Y vamos al relato (Expectación): Una tarde el mes de noviembre de 1930 estaba reunido en mi casa, como de costumbre, el Comité revolucionario, y se trató de la designación de carteras. Opinaron los reunidos que me correspondía a mí el Ministerio de Gobernación. Me opuse terminantemente. Endendia yo que los hombres de mi generación, los hombres jóvenes, teníamos la obligación de quedar a retaguardia, de ser como una reserva de la República. Se obstinaron, y entonces planteé el problema en la siguiente forma: "Para que pueda yo aceptar ese compromiso es indispensable que todos afirmen - me parece que todavía no asistían los ministros socialistas - que tienen el mismo concepto que tengo yo de lo que es la autoridad y el modo de ejercerla, y expliqué cómo entendía dos conceptos importantes. Teníamos entonces, tenía yo entonces, la preocupación de que si la República triunfaba a consecuencia del movimiento revolucionario que se preparaba, la labor del ministro de la Gobernación, que llegaba al Ministerio en momentos de máxima tensión del espíritu público y hasta de desmán de las masas lanzadas, había de ser una labor ingrata, y advertí a mis compañeros que durarían los demanes, si los había, hasta el minuto mismo en que yo transpusiera los umbrales de Gobernación, porque desde ese instante la fuerza pública reprimiría por igual los de amigos y adversarios; y con esa condición, admitida por todos, acepté yo la cartera de Gobernación.

No triunfó el movimiento revolucionario. Vino la República, como todos sabéis, por vía pacífica, y durante el primer mes no tuve que utilizar para nada la fuerza pública en toda España; la paz fue absoluta; pero yo, que temía el instante en que eso fuera necesario, no cesaba de tantear los resortes del Poder para ver cómo habían de responder en caso preciso. Y así sobrevienen los sucesos del 10 de mayo; todos los recordáis: unos jóvenes mal aconsejados que al salir del Círculo Monárquico de la calle de Alcalá provocan un conflicto. Se amotina la gente; yo estaba en el campo; era domingo; llegué a las dos y media de la tarde; acudí yo mismo al lugar de los sucesos y logré despejar aquello, saliendo los monárquicos que estaban todavía en el local, y pareció terminado el conflicto en la calle de Alcalá; pero a las tres me entero de que se intenta el asalto a un periódico de la mañana;

doy las órdenes oportunas, va la fuerza pública, hay un choque algunas víctimas, y se evita el atropello. A las cinco de la tarde empiezan a llegar los ministros a Gobernación; con motivo de los sucesos de la calle de Serrano y de las víctimas habidas frente al "A B C", parece que los ánimos están muy excitados; viene la manifestación a la Puerta del Sol, y a las siete de la tarde la Puerta del Sol está abarrotada. Ya se hallan los ministros reunidos en el Ministerio de la Gobernación; les hago presentir la absoluta necesidad de que la fuerza pública, que está en los patios del Ministerio, despeje la Puerta del Sol, y todos opinan que no es momento de utilizar la fuerza pública; que es el buen pueblo republicano quien manifiesta su protesta por determinadas cosas, y que no hay motivo para echar contra él la fuerza. Transcurre toda la noche - toda la noche! - oyendo yo desde mi despacho del Ministerio de la Gobernación los gritos de las turbas en la Puerta del Sol pidiendo mi destitución fulminante, y ya de madrugada se presenta en el Ministerio una Comisión del Ateneo, dialoga con un ministro y le pide autorización para leer desde las ventanas de Gobernación las conclusiones aprobadas por el Ateneo, y desde mi despacho, con los balcones abiertos, oigo yo leer las conclusiones, lo cual hacen desde un balcón del piso bajo del Ministerio. Una de ellas era mi destitución fulminante; pero la otra era el desarme inmediato de la Guardia Civil, que estaban en los patios de Gobernación oyéndolo. Los que me conocen comprenderán lo que rugía dentro de mí en aquellos instantes. Y así transcurre toda la noche, forcejeando yo para que me dejaran utilizar los resortes del poder y oponiéndose terminante los ministros a que la fuerza saliera, y queda de madrugada despejada la Puerta del Sol por un ligero incidente, por una pelea entre dos de los que están allí: dos tiros que sonaron y en seguida quedó vacía la Puerta del Sol. (Una voz; "¿Qué ministro autorizó eso?" Fuertes protestas. El público pide que se expulse al interruptor y tributa al orador grandes aplausos.) Advierto que no me molestan las interrupciones. Hasta las agradezco. Pero lo que digo es que no estoy dispuesto a salirme de lo que me propongo decir pase lo que pase. (Muy bien. Grandes aplausos.)

Nos separamos de madrugada; pero antes de hacerlo advertí a mis compañeros de Gobierno de la absoluta seguridad que tenía yo de que aquel día - unas horas después - había de empezar la huelga general en Madrid, y que tenía el convencimiento

de que sería un día de franca rebelión. No participaron de mi opinión los compañeros, y cuando yo les rogué que se me autorizara para sacar la fuerza pública desde el amanecer, para que patrullara por las calles, se negaron terminantemente. Me retiré a mi casa a las siete, y a las ocho recibo el aviso de que ha empezado la huelga general, como yo me temía.

Llamo a los ministros por teléfono uno a uno. Les doy la noticia y les ruego que me dejen utilizar la Guardia Civil. Todos me contestan que nos vamos a reunir a las diez, y que hasta esa hora no se haga nada. En efecto, nos reunimos a las diez en la Presidencia, y yo vuelvo a plantear el problema, haciendo ver la imprescindible necesidad de utilizar la fuerza pública. Siguen negándose, y a mediodía llega la noticia de la primera quema, la del convento de la calle de la Flor, y yo planteo el problema con toda crudeza; es absolutamente imprescindible que la Guardia Civil salga y reprima con energía. Entonces un ministro pronuncia estas palabras: "Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil, yo dimito." Van dando su opinión, y por abrumadora mayoría se inclinan hacia mi compañero. En aquel instante dimití yo, haciéndoles ver todo lo que significaba para la República, para el crédito de España dentro del país y en el Extranjero, lo que estaba ocurriendo. (Muy bien.); todo lo que significaba de desprestigio en el Poder público y en la autoridad del ministro y el Gobierno lo que estaba pasando y a dónde podían llegar los desmanes si eso continuaba. Dimití pero no me marché de la Presidencia. Como pude, en la forma que pude, salvé lo que pude. Y a las cuatro de la tarde, otra vez ante los ministros, volví a insistir en mi dimisión, explicando con todo detalle las consecuencias que yo preveía de los sucesos. Se negaban a admitirme la dimisión. Me retiré a mi casa y redacté una carta dirigida al presidente razonando una vez más cuanto tenía dicho; pero vinieron a verme personas de cuyo criterio tengo el más alto concepto - hombres de conciencia -, y todos me pidieron, me aconsejaron y suplicaron que no me marchara. A las doce de la noche acudí a la reunión en el Ministerio de la Guerra. El panorama había cambiado. Llevaba la carta de dimisión en el bolsillo. Los ministros se habían dado cuenta de que aquello no podía continuar, y que era absolutamente indispensable que el Poder público volviera por su prestigio. Al reiterar ellos su negativa a aceptar mi

dimisión les advertí que al Consejo del día siguiente llevaría una serie de propuestas que eran para tomar o dejar, y que único modo que yo tendría de poder seguir siendo ministro de la Gobernación era que se me aceptarán íntegramente. Pasé la noche en el Ministerio de la Gobernación, advirtiéndole a los gobernadores el peligro que inevitablemente se corría de que lo ocurrido en Madrid pasara a provincias. Al día siguiente la mayoría de los gobernadores cumplieron con su deber, eficazmente ayudados - hay que decirlo - por las fuerzas republicanas y socialistas de muchas provincias, que actuaron de guardia civil. Hubo, en cambio, otras provincias en las que la autoridad brilló por su ausencia, singularmente en Málaga, donde la autoridad militar y la civil no tuvieron nioción siquiera de lo que es la dignidad del cargo que se ejerce. (Muy bien. Aplausos.), y además llevaron su abandono al punto de no darme noticia de lo ocurrido en la localidad, enterándome yo de lo que había pasado por telegramas particulares de Prensa a media tarde. Por la tarde se celebró el Consejo de ministros, y al Consejo llevé mis condiciones, que eran éstas: destitución de las autoridades que habían faltado a su deber; plenos poderes para el ministro de la Gobernación, en la forma, que en materia de orden público no tuviera que rendir cuenta a nadie de sus actos hasta después de realizados. Es decir, los poderes para el ministro de la Gobernación consistían en que del orden público respondía él libremente, y sólo después de realizada la represión comparecería ante el Consejo de Ministros para rendir cuenta de sus actos. Sin discusión, sin una sola palabra, se me aceptaron las condiciones y se agregó una más, a propuesta del presidente: Que aun en estado de guerra correspondía al ministro de la Gobernación la dirección del orden público, ejerciendo la autoridad sobre las militares; proposición que acepté y agradecí. Aquella noche empecé a ser ministro de la Gobernación. Pocos días después, unos sucesos ocurridos en el Norte me proban que, en efecto, la autoridad había vuelto por su prestigio y sabía cumplir con su deber. Estos son los hechos, y yo declaro que a mi conciencia de católico ni mi conciencia de gobernante me han remordido jamás por la responsabilidad de estos hechos, porque ni pude evitarlos ni pude reprimirlos.

Queda una responsabilidad, pude marcharme y me quedé. ¿Hice bien o hice mal? (Varias voces: Bien.) También mi conciencia me ha absuelto de eso, porque mirando hacia atrás, y recordando los cinco meses que pasé todavía en el Ministerio de

Gobernacion. declaro que solo Dios y yo sabemos
los males que he podido evitar y he evitado a
España y a la Republica. Hice bien en quedarme.
(Grandes aplausos)

17.- Los Sucesos del 11 y 12 de mayo - Los días sacrilegios.

Separata y BOE de Málaga, año 64, 15 de junio de 1931, núm. 7, págs. 196-202.

Destrozado el corazón, sin que acertemos a coordinar las ideas, escribiendo sobre tumbas profanadas, ante la trágica visión de templos saqueados e incendiados; centros de cultura destruidos; casas religiosas, ayer refugio de almas nobles dedicadas a la práctica de la virtud y a hacer el bien, hoy transformadas en solares, llenos de escombros, afrenta de un pueblo civilizado; dispersos los Ministros del Señor y errantes y fugitivas las Religiosas, pues nada respetaron las turbas, y obligado nuestro amadísimo Prelado a vivir lejos de su amadísima Diócesis en la ciudad de Gibraltar, donde llegara dos días después de perder todo lo suyo en el incendio de su propio palacio, acosado de cerca por turbas de foragidos que, doquier encontraba amparo y protección, amenazaban con represalias e incendios..., consignando de antemano la más enérgica protesta contra los horribles sacrilegios e inauditas profanaciones que hicieron perder, en horas, a Málaga el renombre que le dieron sus gloriosas tradiciones, con pecho que tiembla, para recuerdo de la posteridad, dejamos aquí consignada la fría narración de cuanto sucedió en la Diócesis desde la noche del 11 de Mayo último.

Confianza del Señor Obispo en las autoridades

Vientos de fronda corrían por la ciudad el día 11 de Mayo desde la hora en que se recibieron las primeras noticias de los graves sucesos acaecidos en Madrid, y ante el repetido anuncio de posibles desmanes de las turbas, el Sr. Obispo acudió insistentemente a las Autoridades reclamando su eficaz protección para los altos intereses religiosos. Una y otra vez se le dieron seguridades de que no pasaría nada absolutamente, siendo de notar que, a las 7 de la tarde, el señor Ciria, Secretario particular del Gobernador Divil D. Antonio Jaén Morente, en nombre de éste que se encontraba en Manzanares, en viaje de regreso procedente de Madrid, avisó al Sr. Obispo que debía estar tranquilo y que para mayor seguridad, la policía y la Guardia Civil vigilarían el Palacio Episcopal y todas las casas religiosas. Es deber nuestro consignar que al

vigilarian el Palacio Episcopal y todas las casas religiosas. Es deber nuestro consignar que al Palacio Episcopal fueron enviadas dos parejas de la Guardia Civil que pudieron contener a la multitud en su primer ataque. Pero luego se retiraron obedeciendo órdenes superiores, que, dice el que era Gobernador interino Sr. Mapelli en nota histórica publicada en "El Cronista" del 31 de Mayo último, fueron órdenes procedentes del Gobernador Militar Sr. García Caminero. Y dueñas de las calles las turbas comenzaron su obra destructora.

Recuerdo oportuno

Dos horas antes de que empezara el incendio unos muchachos guardaban las puertas del Palacio Episcopal, diciendo a cuantos se acercaban para recoger a las Hermanas de la Cruz y saludar al señor Obispo que, a las siete de la tarde, las Hermanas se habían trasladado muy lejos y que el Sr. Obispo y sus familiares habían abandonado el Palacio dentro del cual no residía ya nadie. Se conoce que el plan era sorprender con el incendio a los que confiadamente moraban dentro del mismo, Hermanos Maristas, Hermanas de la Cruz y señor Obispo.

Arde el Palacio Episcopal

No obstante las seguridades que se dieron por quien podía y debía, de que nada pasaría, a las 11 de la noche, comenzaron las turbas su obra satánica de devastación en la Iglesia y residencia de padres Jesuitas, desde donde se corrieron, ébrias de venganza, al Palacio Episcopal que, cual si se obedeciera a un plan preconcebido, una vez se hubo retirado la Guardia Civil, incendiaron simultáneamente por sus cuatro costados.

Cómo relata el asalto un testigo presencial

A media noche un numeroso grupo de revoltosos llegaron a la puerta del convento que en su propio Palacio habilitara el Sr. Obispo para morada de las Hermanas de la Cruz cuya única misión es visitar y asistir cuidadosamente a los enfermos pobres, sin estipendio alguno. Y, sin aviso previo, rociaron de gasolina un Alba que llevaban procedente del saqueo de los Jesuitas, que les sirvió de mecha para empezar el incendio.

Komentos de valor y consternación

Cuando las llamas se alzaban ya imponentes, el Sr. Obispo, acompañado de las Hermanas de la Cruz, que a su lado buscaron refugio, de sus familiares y de los porteros, se decidió a salir en busca de los incendiarios, por la única puerta que quedaba libre. Preguntándole alguien: ¿qué va a ser de nosotros? *"Confianza, dijo sin vacilar, que quien confía en el Señor no será jamás confundido"*.

Sin más tiempo que el preciso para recoger el Tesoro de los tesoros, las Sagradas Hostias que se guardaban en tres de los Sagrarios de su palacio - el de su capilla, el de la Adoración Nocturna y el de las Hermanas de la Cruz, - cerrada la puerta del Colegio de los Maristas, dueñas ya las turbas de la puerta principal, de la de las Hermanas de la Cruz y la Adoración Nocturna que el incendio destruía, buscaron el Sr. Obispo y los suyos refugio en un basurero, especie de sótano en el cual hay una puerta que comunica con una estrecha calle y que utilizaban los Hermanos Maristas para sacar la basura. Allí el Sr. Obispo se preparó para la muerte y exhortó a las almas buenas que le acompañaban a morir por la fe si precisaba, siendo estas su palabras llenas de unción: *"Jesús mío, perdónanos y perdona a tu pueblo, ten misericordia de nosotros que hemos pecado, y acepta el ofrecimiento que te hacemos de nuestras vidas por tu reinado en España y especialmente en la Diócesis. Madre Inmaculada, salva nuestras almas, cobíjanos bajo tu manto"*. Luego dio a todos la Absolución y juntos comulgaron las Sagradas Hostias, empezando luego el rezo del santo Rosario que interrumpían los gritos de la multitud.

El Señor Obispo se presenta a las turbas

Rezada la primera decena del Rosario, golpearon reciamente los incendiarios la puerta que empezaban a rociar con gasolina. Y entonces el Sr. Obispo, sin perder un instante la serenidad, abrió de par en par la puerta y apareció ante ellos vestido sencillamente, con su sotana, su pectoral y su solideo - lo único que salvó de todo lo suyo - diciéndoles con voz dulce y fuerte: *"Aquí me tenéis. A vuestra nobleza me entrego."* Sorprendidos por la majestad del bondadoso Prelado que con una sonrisa acallaba los odios de las fieras, hubo un momento de vacilación en el cual, si es cierto que un desalmado osó poner su mano sacrilega sobre el

pecho del digno Pastor y no faltó quien gritara: ¡que muera!, sobresalieron afortunadamente las voces de los que decían: ¡que se le proteja, que se le proteja! "Es que yo no estoy solo, dijo el Sr. Obispo, conmigo están mis familiares y las Hermanas de la Cruz". "Que salgan también, dijeron todos, que no se les hará nada."

El Señor Obispo escoltado por las turbas recorre las calles de Málaga

Y el Señor Obispo y los suyos, por entre una abigarrada multitud en la cual no faltaba algún infeliz que blandiera revólver y no se oyeran algunas voces aisladas de ¡que muera!, empezó a recorrer la vía dolorosa de odios, persecuciones y destierro voluntario, que sufre resignadamente, puesta en Dios toda su esperanza. Nota simpática digna de ser alabada, es la que dió un camarero de un café establecido en el Pasaje de Alvarez, el cual le saludó con el mayor respeto y se le ofreció sinceramente. Hemos tenido la satisfacción de estrechar la mano de este honrado camarero, que se llama Ramón Roldán Guerrero. Como la casa del sacerdote donde iba a refugiarse estaba algo lejos, tuvo que pasar por el trance de ver en una de las revueltas cómo ardía su propio palacio. Como aumentara el griterío del grupo de los que con él iban, le manifestaron algunos la necesidad de ponerse a salvo cuanto antes, pues pronto no podrían responder de su vida. Manifestando algunos su impaciencia con amenazas, alguien le dijo: póngase un abrigo de señora y quítese eso (el solideo). Sin unmutarse, sonriendo contestó "No, Málaga es muy noble". Por fin pudo llegar a la casa del amigo sacerdote, único albergue se le ofreció.

Pasmosa y santa serenidad del Señor Obispo

Al entrar en la casa donde creía estar seguro, sin exhalar la menor queja, se limitó a decir a los suyos con la misma paz y tranquilidad conque sonreía a los que le arrojaban de su casa: "continuemos el rezo del Santo Rosario." Y rezaron todos juntos los misterios de dolor, nunca como entonces entendidos y practicados por nuestro sufrido Padre y Pastos.

Como alguien se quejara del mal trato que la habían dado, contestó el señor Obispo: *pues todavía no nos han hecho lo que a San Pablo, que le apedrearon, después que trabajó para*

contenerlos a todos, y por último le cogieron la cabeza ... de modo que bien podemos decir que a nosotros no nos han hecho nada y dichosos los que les han cabido en suerte padecer algo por el nombre de Cristo.

Al decirle su hermana que no tenía ni para poner un telegrama, ni más ropa que la puesta, sonriente contestó: "Mejor, ahora estamos como los apóstoles."

Quejándosele un sacerdote de que nada se hubiera podido salvar, al instante le interrumpió diciendo: "Pues nos lo has dejado todo, porque lo principal es la gracia de Dios y esa, por su misericordia, la tenemos."

Se recrudece la persecución contra el Señor Obispo.

Pocas horas de tranquilidad pudo gozar el Sr. Obispo en su refugio, pues a las cuatro de la madrugada se le presentó un familiar de un vecino de la casa diciéndole que debía salir de ella, pues corría peligro la vida de los vecinos. Y el Sr. Obispo que no quería ser molesto a nadie, salió muy pronto para los montes de Málaga refugiándose en un cortijo donde pasó todo el martes, día 12, contemplando desde su cautiverio el incendio de todas las iglesias de la capital de su diócesis.

El día 13, después de celebrada la Santa Misa, Dios permitió nuevos sobresaltos para el atribulado espíritu del Sr. Obispo. Grupos de obreros del campo se presentaron en actitud amenazadora ante el cortijo diciendo que lo incendiarían si antes de dos horas no salía el Sr. Obispo.... Y nuevamente errante, fugitivo, buscando albergue en casas que se lo negaron por miedo a las represalias de las turbas, pudo, por fin, descansar en una, mientras un buen amigo preparaba su salida para Gibraltar.

Sale el Señor Obispo para Gibraltar

Y en la noche del día 13, con los suyos, se alejaba de la diócesis a la que ofreció vivir siempre consagrado, acosado, perseguido por las turbas, con el dolor en el alma, pero llevando en el pecho guardado el copón con las Sagradas Hostias que aquella misma mañana había

consagrado, el Obispo de la Eucaristía que en la Eucaristía encontró su fortaleza y auxilio.

Le reciban con noble hospitalidad en Gibraltar.

Después de la una de la noche, como criminal que huye, el buen Obispo, que solo hizo siempre el bien, llegó a Gibraltar, recibido por el Jefe de la policía británica, el Sr. Obispo de Gibraltar y multitud de vecinos de la ciudad. Fueron momentos que el Sr. Obispo de Gibraltar recuerda con santa emoción aquellos en que recibió de manos del Sr. Obispo de Málaga el copón para que lo guardara en el Sagrario de su Catedral. Al día siguiente hubo en la Catedral Misa de comunión y Besamanos, siendo constantes las pruebas de afecto que recibe nuestro venerado Sr. Obispo de los representantes del gobierno británico, de los vecinos de la ciudad, ingleses, españoles, hebreos y moros, gobernando desde allí su amada diócesis, preocupación constante de su alma noble que a tantos sufrimientos sigue sujeta, siendo entre todos el más intenso el de verse alejado momentáneamente de los suyos, como le dejó consignado en documento precioso que la prensa católica ha reproducido con frases de elogio para nuestro Sr. Obispo.

La ola sacrilega sigue su camino devastador.

En la imposibilidad de extendernos hoy como desearíamos y sin perjuicio de ampliar la triste narración de tantos hechos vandálicos, damos a continuación rápida cuenta del conjunto de saqueos, devastaciones e incendios.

Iglesias y conventos incendiados.

EDIFICIOS.- El Palacio Episcopal, del que solo quedan los muros calcinados.

PARROQUIAS.- Nuestra Señora de la Merced, San Felipe Neri, San Pablo, Santos Mártires y Santo Domingo.

CONVENTOS E IGLESIAS.- Sagrado Corazón de Jesús (Jesuitas), San Agustín (Colegio de Agustinos), Barcenillas (Colegio de la Asunción), Angel (Monjas dominicas), San José de la Montaña (Colegio), Carmelitas Descalzas, Capuchinas, Hermanas de la Cruz, Hermanos Maristas (Colegio), Zamarrilla, Aurora María y Puerto de la Torre.

Hay que hacer constar, que el fuego ha consumido todo el archivo de la diócesis, que se remontaba a cuatro siglos, la curia y todas las oficinas con todos los expedientes en tramitación y

tramitados. Además la quema y robo de las Cajas de Caudales que guardaba entre las que desechaba por su importancia la Caja del acervo pío, quedando sin poder ser cumplida ninguna fundación y sin los valores dotales las religiosas que allí los tenían en depósito.

Iglesias devastadas y conventos saqueados.

PARROQUIAS.- Nuestra Señora del Carmen, San Juan, Santiago, Nuestra Señora de las Angustias y San Patricio.

18.- "Las Iglesias saqueadas".

BOE de Málaga, año 64, 15 de julio de 1931, núm. 8, págs. 231-232.

A pesar del tiempo transcurrido, aun pesan sobre nosotros como losa de plomo las escenas de infierno que presenciámos en los días tras los del 11 y 12 de Mayo. La reacción no obstante se va abriendo paso y es fácil que en algunas de las Parroquias saqueadas comience muy pronto el culto interrumpido por las ordas vandálicas.

Los pobres curas

sin recursos materiales para atender al desescombro y limpieza de los templos; sin altares, sin imágenes ni confesionarios, ni púlpitos, que fueron hechos añicos y quemados en inmensa hoguera, y hasta sin aras, que a golpes destrozaron, se ven imposibilitados de hacer las obras más urgentes y los reparos más necesarios para la celebración de los augustos misterios.

A las Iglesias mencionadas en el número anterior tenemos que añadir las siguientes cuya noticia llegó tarde a nosotros y que quedan consignadas en estas columnas.

Estas son: la Ermita de la Virgen del Carmen de Olías, la Iglesia de Bobadilla (Estación) y la Iglesia de los Boliches (Fuengirola), de las cuales, como todas las saqueadas, solo han quedado las paredes desnudas.

10. — S. C. "Joyas artísticas destruidas o robadas en los sucesos del 11 y 12 de Mayo".

BOE de Madrid, año 61, 15 de agosto de 1921, núm. 9, págs. 362-364.

Joyas artísticas destruidas o robadas en los sucesos del 11 y 12 de Mayo

Vamos a poner una relación muy ligera de las joyas artísticas más salientes que el nuevo vanditismo quemó, destruyó o robó.

EN EL PALACIO EPISCOPAL

Magüflico artesonado del siglo XV en la capilla; suntuosa decoración estilo barroco, siglo XVII, procedente del ex convento de Santo Domingo; imagen del Salvador, figura románica de precio inestimable, regalada a la diócesis por el leonés D. Fernando de Antequera; bellísimas imágenes de la Inmaculada y San José del siglo XVII; un cuadro de Wandick de la Virgen con el Niño de un metro y medio de alto, de inapreciable valor; bandejas y lámparas de plata repujada; sagrario de bronce y plata repujada muy artístico; retablo de madera tallada de gran precio; cuadro de 3 x 2 metros de Santa Rosalia, autor Niño de Guevara, propiedad de don Francisco Fresnedo. Importantísimos documentos del archivo diocesano desde la Reconquista de Málaga, el cual fué todo incendiado; gran parte de la biblioteca episcopal, desapareciendo con ella muchos y raros ejemplares.

EN SANTO DOMINGO

El famoso Cristo de Pedro de Mena, único en el mundo, valorado en un millón cien mil pesetas, que un Obispo de Málaga no quiso vender a unos extranjeros; Virgen de Belén, soberbio medallón, la mejor obra según los críticos del mismo Mena; la Magdalena, Angeles lampadarios y el retablo de la Virgen de Belén, obras todas del mismo autor; S. Miguel y el Cristo de la Columna, esculturas del siglo XVII; Virgen del Pozo del siglo XV; Cristo de las Cabrillas del XVI, y otras esculturas, relieves y retablos de indiscutible valor artístico; un retrato del Obispo Alonso de Santo Tomás, lienzo de Niño de Guevara; otro lienzo de la Asunción firmado por Francisco Pacheco; otro lienzo de la escuela de Alonso Cano; zócalos del siglo XVII artesonado mudéjar.

PARROQUIA DE SANTIAGO

Cinco bustos de Jovitas de Pedro Mena; S. Juan de Dios del mismo; lienzo de la Virgen del Pilar de Niño de Guevara; otro de Santiago, su autor Miguel Maunque; Cristo de la Inmunda y la Adoración de los Reyes del mismo autor anterior; cuatro lienzos de la escuela Granadina del siglo XVII.

SAN AGUSTIN

Dolorosa de Pedro de Mena; Cristo difunto, escultura de Fernando Ortiz; Virgen de Valbanera, escultura castellana del siglo XVII; la Concepción y S. Agustín, dos lienzos de Niño de Guevara; otro de Miguel Maunque y retablo mayor, obra de Martín Aldehuela.

PARROQUIA DE LOS MARTIRES

Virgen de las Lagrimas y S. Pedro Alcántara de Pedro de Mena; Jesús en el Huerto, escultura de Pedro Ortiz; varias esculturas, estilo Duque Coquejo; dos lienzos de la vida de San Francisco de Niño Guevara; y otro de Jesús difunto del siglo XVII.

PARROQUIA DE SAN FELIPE NERI

Cuatro esculturas de Pedro de Mena, a saber: La Dolorosa de los Servitas, Santa Ana, S. José y S. Joaquín; cuatro lienzos de Miguel Manrique.

PARROQUIA DE SAN JUAN

Tres esculturas de Jesucristo del siglo XVII; una Purísima del mismo siglo policromada, escuela granadina; S. Juan Bautista, escuela de Alonso Cano, Virgen de la Antigua del siglo XVI; un lienzo de la Virgen del Rosario atribuido a Murillo; otro de S. Ildefonso, influencia italiana del siglo XVII; cinco más, escuela Valdés Leal.

PARROQUIA DEL CARMEN

Cristo de la Misericordia de Pedro de Mena; Ecce Homo y Dolorosa de la escuela del mismo; la capilla del Sagrario que toda ella era joya de portentosa ornamentación con sin número de ricas esculturas; el soberbio retablo del altar mayor, de ágata.

SAN PEDRO

Varias esculturas escuela de Mena y dos retratos, uno de ellos de Niño de Guevara.

PARROQUIA DE LA MERCED

Varias esculturas del siglo XVII; Piedad, de Francisco Palma; una Concepción, tipo de Gregorio Hernández y un lienzo de Virgen de Miguel Manrique.

SAN PABLO

La incomparable Soledad de Pedro de Mena, quemada en el río Guadalmedina.

IGLESIA DE SAN JOSÉ

Dos lienzos, uno de Miguel Manrique.

COVENTO DE CARMELITAS

Dolorosa de Pedro de Mena y manuscritos del siglo XVI de valor artístico y literario.

En todas partes infinidad de ornamentos, cálices, orfebresías, encajes, bordados, verdaderos museos artísticos.

20.- "Comentario.- Lo religioso, lo irreligioso y lo antirreligioso"

"El Sol", 4 de junio de 1931

Seguimos percutiendo y auscultando el espíritu público español, que no es lo mismo que la opinión, pues la llamada opinión pública no siempre tiene limpia conciencia de su propio espíritu. El examen de conciencia colectiva, y más que colectiva, común, es más difícil aún que el examen de conciencia individual, y todos los confesores y curadores de almas saben cuán difícil es éste.

Seguimos percutiendo y auscultando a este espíritu público español, atacado hoy de hiperestesia, de histeria y hasta de epilepsia. Los más de los españoles con algo de conciencia común, de conciencia civil o política, ni saben lo que quieren y ni siquiera saben lo que no quieren. Muchas de las explosiones públicas no son más que ataques epilépticos. Y en ellos, el público, o se muerde la lengua o irrumpe en gritos inarticulados, que no son otra cosa los más de los vivas y de los mueras. Nos basta volver la vista a las jornadas de las quemas de conventos.

Es indudable, a las quemas de conventos se unieron profesionales del motín, deportistas de la violencia; pero es no menos indudable que esa obra tuvo si un carácter económico, un carácter también religioso, o sea antirreligioso. No irreligioso. Porque toda protesta, pacífica o belicosa, contra una forma de religión, se hace movido por otra forma de religión. La irreligión, la verdadera irreligión, no protesta nunca, ni pacífica ni belicosamente. Se limita a ignorar la religión -y con ella, a ignorar la religiosidad- y a encogerse de hombros ante ella. El ateo religioso, el que profesa la religión -que lo es- del ateísmo, cree en el anti-Dios. Cree tanto como el creyente en Dios. Todo acto antirreligioso, que es acto religioso, es acto de fe. Tan de fe es creer que hay Dios como lo es creer que no lo hay. ¿Saberlo... decís? Sí, ya sé que dicen que saber no es creer, que saber es cosa de razón. Pero después de todo si fe es, según nos reza el Catecismo del P. Astete, creer lo que no vimos, razón -razón religiosa- es creer lo que vemos. ¡Y qué terrible es la religiosidad racionalista!

"La religión es el opio del pueblo", dicen que decía aquel terrible profeta, hoy canonizado y erigido en momia de idolatría, que fue Lenin. No sé si dijo "opio del pueblo" o si dijo "opio para el pueblo"; pero es igual. Opio para el pueblo, elaborado por el pueblo mismo. Y lo es toda religión, incluso, ¡claro está!, la religión de Lenin, el materialismo histórico de Carlos Marx -otro profeta canonizado-, elevado a religión bolchevista, con sus dogmas, su disciplina, su jerarquía y su liturgia. Y es que el pueblo apetece opio, porque lo necesita. Uno u otro opio, el ruso ortodoxo, el

católico, el nacionalista o el bolchevista. Necesita opio para calmar sus dolores y hasta su hambre; necesita opio para consolarse de haber nacido a esta vida pasajera. Y ese opio es creer en otra vida, o después de la muerte corporal o antes de ésta. ¿Qué es el comunismo sino fe en otra vida? O en otra sociedad, que es lo mismo. Opio es toda utopía, aunque se envuelva en cientificismo.

Ea, pues, religión el bolchevismo ruso, y lo es el fajismo italiano, y lo es el socialnacionalismo tudesco, y lo es el americanismo, y lo es el sindicalismo anarquista, y empieza a serlo el neorrepublicanismo español, que aún no sabe bien ni lo que quiere ni lo que no quiere. Y quema conventos para ver si a la luz de sus llamas ve salir el sol -hay quien enciende una candela para verlo nacer-, y no ve más que humo. Y todo es opio; opio para calmar los dolorosos retortijones del hambre espiritual, del hambre de personalidad -individual o colectiva-, del hambre de historicidad, del hambre de inmortalidad histórica. A los más de los quemadores de conventos les mueve el ansia de representar un papel en la tragedia de la Historia, de salir a escena aunque sea como coristas, y el que puede, de partiquino. "Estamos viviendo unos momentos históricos", me decía un pobre mozalbete, atosigado de la peor literatura llamada proletaria. Literatura novelística, claro es.

¡Hambre de historicidad! ¡Hambre de celebridad! ¡Qué sentimiento tan divino! En unas oposiciones a escuelas de niños que se celebraban en Salamanca, un opositor, un maestrillo, explicaba en un ejercicio a unos niños el pasaje aquél del Catecismo en que el P. Astete nos dice que Dios hizo el mundo para su gloria, y al explicárselo les decía que Dios hizo el mundo para hacerse célebre. Y el juez del Tribunal de oposiciones que me lo contaba me decía riendo: "Ya ve usted, no sabía explicarse eso de que uno haga algo para su propia gloria como no sea para hacerse célebre, para ganar renombre". Y yo le contesté: "Pues se lo explica muy bien el pobre maestrillo que oposita para ganarse un sueldecillo. ¿No reza usted todos los días "santificado sea el tu nombre"? Pues santificar el nombre de Dios -el nombre, fíjese usted- es darle renombre, es celebrarlo, es hacerle célebre a Dios, a Dios, cuya gloria celebran los cielos". Y le hice comprender al pedagogo que la ingenua religiosidad del pobre -¡y tan pobre!- maestrillo no iba descaminada, que el maestrillo tenía conciencia histórica.

¿Y la gloria de la República española? O sea, ¿y la religiosidad civil española? Porque si ha de haber una verdadera unidad española, si España ha de ser una nación con una conciencia común, ha de ser sobre el cimiento de un sentimiento común de una misión del pueblo español. Y ahora nos falta averiguar, percutiendo y auscultando, si ese sentimiento se fragua bajo los ataques histéricos.

Miguel de UNAMUNO

21.- MAURA, Miguel, Así cayó Alfonso XIII

Barcelona, 1960, págs. 293-307.

ME ENFRENTO A DOS PRELADOS BELICOSOS

Prólogo

Entre las mil patrañas que como artículo de fe han circulado por la España franquista, la que primero tomó carta de naturaleza fue la de pintar a los hombres del Gobierno provisional como unos masones, ateos, judaizantes, perseguidores de la Iglesia y de sus ministros, incendiarios y sacrilegos. Para justificar una parte al menos de esos piropos suelen sacar a colación el trato, mejor dicho el maltrato, que, a su parecer, di a dos prelados durante el corto espacio de tiempo que duró mi paso por el Ministerio de la Gobernación.

Según esas versiones, yo, sin más ni más, porque no me era simpático o porque se resistía a obedecer mis órdenes, había deportado a Francia al Obispo de Vitoria y le había prohibido el acceso a su diócesis durante el tiempo de mi mandato. En cuanto al cardenal don Pedro Segura, Primado de España y arzobispo de Toledo, porque era hostil a la República le había prendido entre guardias civiles y conducido, también a la frontera francesa, poco menos que esposado y como un vulgar criminal, impidiéndole igualmente el retorno a España.

Pues bien, va el lector a enterarse con detalle de ambos episodios y tras el relato, que juro será, como todo lo que llevo escrito sobre este periódico, fidelísimo, juzgará por sí mismo de una y otra patraña.

Réstame advertir que si traigo a colocación ambos episodios en este relato que vengo haciendo es tan sólo en legítima defensa, ya que por varias y notorias razones nada tuvieron para mí de gratos.

El Cardenal don Pedro Segura, arzobispo de Toledo

Para nadie era un secreto que las altas jerarquías de la Iglesia española veían con muy malos ojos al régimen instaurado.

Cualquiera que fuese la actuación del Gobierno, y en forma destacada la de los dos miembros del mismo reconocidamente católicos, habíamos de contar de antemano con la condenación de los prelados españoles.

Por fortuna para nosotros, es decir, para Alcalá Zamora y para mí, el nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, no participaba ni a cien leguas de esa enemiga sistemática y ciega contra la República y su Gobierno. Fue nuestro paño de lágrimas y, además, gran colaborador para evitar un rompimiento definitivo y estrepitoso entre la Iglesia y el Gobierno. Yo, personalmente, acudía al él a cada instante cuando había de enfrentarme con algo relacionado con la Iglesia, en las funciones de mi cargo.

Tampoco era un secreto que quien más se distinguía en su odio al régimen republicano era el cardenal arzobispo de Toledo, Primado de España, don Pedro Segura. No perdónaba ocasión, en sus predicaciones en la catedral de Toledo, de lanzar anatemas bien sonoros contra la República y sus servidores. Le atribulan una frase lanzada en una de sus sabatinas desde el púlpito de la catedral toledana, según la cual "debería caer la maldición de Dios sobre España, si la República se consolidaba".

Fuese o no cierta esta versión muy difundida entre los medios católicos que se mostraban orgullosos de la valentía que ella entrañaba, lo cierto fue que sabíamos que el cardenal arzobispo era un enemigo irreconciliable. En efecto, a poco lanzó el prelado una carta pastoral plagada de censuras a los actos del Gobierno, que hasta el momento se había limitado a proclamar la libertad de conciencia en su decreto del 15 de abril. Dicha pastoral, dada en forma de carta circular a los prelados advertía que la Iglesia se sentía profundamente alarmada por el rumbo que el régimen recién nacido llevaba.

Puso fuego al polvorín, ya bastante cargado, la aparición en Gaceta del decreto del 22 de mayo, estableciendo la libertad de cultos y de conciencia, cuya parte dispositiva quedó definitivamente así redactada:

(...)

Este decreto desencadenó las iras del primado y la censura de una parte del episcopado español. Como no era posible mantener esa tirantez de relaciones con la máxima autoridad eclesiástica, el Gobierno solicitó de la Santa Sede, por conducto del nuncio, la remoción del primado. La solicitud se tramitó, a fines de mayo, por el conducto oficial del legado pontificio.

No habían realizado algunos prelados, y muy especialmente el cardenal Segura, el cambio radical que en la política religiosa representaba el advenimiento de la República, en la que, por el momento al menos, la preponderancia absoluta correspondía a elementos, no sólo anticlericales de siempre, sino en gran número enemigos declarados de la Iglesia. Era ello una realidad notoria e inevitable en aquella hora. Pues bien, en vez de colaborar y ayudar a quienes desde dentro del Gobierno luchaban a diario para paliar, en cuanto fuese hacedero, la acritud de la izquierda, daban con sus estridores y sus ataques armas nuevas a los enemigos de la Iglesia y de ellos mismos. ¡Cuántas horas de conversación con el nuncio pasé yo, buscando con él el

camino para domar esas peligrosísimas rebeldías de las autoridades de la Iglesia española y de los católicos organizados!...

Por más que el nuncio predicaba con el ejemplo y exhortaba a los prelados y a los jefes de las organizaciones católicas a la cordura y a la sensatez, el abismo entre ellos y el régimen se agrandaba por momentos, llevando camino de convertirse en auténtica guerra religiosa que daría al traste con muchas cosas sagradas.

Cuando menos lo esperaba, me visitaron en mi despacho un secretario del nuncio y don Ángel Herrera, fundador y director del diario *El Debate*, persona de la máxima influencia en los medios eclesiásticos, y gran autoridad en materia religiosa por su amplia cultura y por el puesto preeminente que, desde el diario que dirigía, ocupaba en la vida política.

Oí de sus labios la noticia de que el cardenal Segura había decidido marchar a Roma y solicitar de mí el indispensable pasaporte. No hay que decir que me apresuré a ofrecérselo para el día siguiente, sin falta. No era leve el peso que me quitaba de encima ese deseo del primado. Nada me dijeron, como era lógico, de las causas de esa decisión del cardenal, pero no es aventurado suponer, al menos así lo entendí entonces, que el viaje obedeciese al llamamiento de Roma, para dar curso a la solicitud del Gobierno del relevo del primado, oyéndole antes de fallar.

Al día siguiente, el cardenal tuvo su pasaporte y salió para Roma vía Irún. Permaneció allí varios días, y la prensa católica de Madrid cuidó de referir los agasajos de que era objeto y su entrevista con el Sumo Pontífice, que, según afirmaban, había durado hora y media. Al cabo de una semana estaba de regreso en España, pero por muy poco tiempo, porque, con gran asombro mío, volvió a salir por la misma frontera y se instaló, en compañía de un paje o secretario, en el pueblecito del Pirineo francés, Saint-Jean-Pied-de-Port, a pocos pasos de la frontera española.

El paje o secretario entraba y salía de España continuamente con una gran cartera al brazo, pasaba el día en San Sebastián y regresaba por la noche a Francia.

Como no parecía claro este continuo ir y venir, ordené que se montase al servicio de forma que pudiésemos salir de dudas, porque, confieso sin rebozo, que todo lo temía, absolutamente todo, del cardenal Segura, y la menor imprudencia podía desencadenar la catástrofe, dado el tono y la temperatura que veía en el Gobierno y leía en la prensa de la izquierda.

En efecto, pocos días después, a la una de la tarde, vino a mi despacho uno de los policías de la frontera llegado en viaje expreso, portador de una serie de documentos hallados la víspera en la cartera del secretario del cardenal en el registro que se le hizo. La gravedad que estos documentos entrañaban era, a juicio mío, enorme.

Había un informe extenso y prolijo de cierto conocido letrado, uno de los jefes de la Acción Católica, en el que se mantenía la tesis de que los bienes de las iglesias y los conventos de España podían ser enajenados y su producto exportado al extranjero, por tratarse de bienes exentos de toda fiscalización por parte del Estado, con arreglo al Concordato, aún vigente, con la Santa Sede.

No recuerdo al detalle los argumentos que empleaba para justificar tal conclusión, pero sí que el documento estaba perfectamente hilado y repleto de doctrina canónica y civil. Desgraciadamente, desaparecieron también dichos documentos con mi archivo, y hoy lamento no tenerlos en mi poder. Junto a ese informe venía una orden del cardenal Primado, redactada en latín, con su traducción castellana, en la que el primado ordenaba a los párrocos que procediesen a la venta, "por lo mejor", de cuantos bienes muebles y valores poseyesen las parroquias e iglesias y tuvieran apercibido el importe de esas enajenaciones para hacer lo que en momento oportuno les sería indicado. Los dos documentos, el redactado en latín y el traducido al castellano, venían firmados por el Cardenal Primado y de ambos pendía el gran sello de lacre con el escudo arzobispal de Toledo.

Leídos concienzudamente aquellos documentos me planteé el siguiente grave problema: ¿Daba cuenta de ellos a mis compañeros del Gobierno en el Consejo de ministros que íbamos a celebrar a las cuatro de la tarde, es decir, tres horas después? ¿Los guardaba para mí sólo? Todo, menos ponerlos en manos del Presidente, que me tenía archiescarmentado con sus vacilaciones y debilidades.

Comprendía que si, en aquellos momentos de tensión de relaciones con las autoridades eclesásticas, salían tales documentos a relucir, sería inevitable que se desencadenase la ofensiva contra los bienes de la iglesia. Mi posición era delicadísima. No quería faltar a la lealtad con mis compañeros, pero tampoco podía ser yo el causante de una auténtica guerra religiosa.

Resolví acudir, como siempre, a mi paño de lágrimas, y pedí al nuncio que me recibiese en el acto. Allí fui, con los documentos recién llegados a mis manos. El asombro y la indignación de monseñor Tedeschini ante lo que veía era consolador para mí. Mientras la representación del Vaticano permaneciese neutral en la contienda y juzgase con equidad los actos de cada cual, no había que temer graves rompimientos. Me aseguré que haría cuanto estuviese en su mano para activar la decisión de Roma respecto al emplazamiento de la residencia definitiva del cardenal Segura, y que velaría para que no tuviese realidad lo que en aquellos documentos se ordenaba.

Debido, sin duda, al fracaso de este intento, comenzó el prelado en su retiro fronterizo a impacientarse. Su secretario no fue detenido, puesto que ninguna razón legal había para ello, pero no volvió a pasar la frontera de Irún como era ya su costumbre.

Unos días más tarde, la policía del paso fronterizo de Bourg Madame, en el Pirineo catalán, me notificó que "el cardenal Segura, vestido de paisano y acompañado de otra persona, ha pasado la frontera en un coche de la matrícula de Toledo, número..., ha pernoctado al parecer en Montserrat y ha continuado su viaje de madrugada, ignorándose su paradero".

Confieso que la noticia me produjo algo más que contrariedad. Resultaba intolerable que las habilidades y rebeldías de un prelado español tuviesen en jaque a un ministro que estaba evitando por todos los medios, incluso faltando a sus deberes de compañerismo y lealtad, el desencadenamiento de algo que barrería muchas cosas vitales para la Iglesia y para los católicos. Hube de guardar también secreta esa noticia, pues de lo contrario habría de revelar la anterior y la existencia de documentos que obraban en mi poder.

Tardé nada menos que cuatro días en dar con el paradero del habilidoso cardenal. Tengo que declarar que Ángel Galarza me secundó eficazmente, guardando absoluto secreto conforme a mis órdenes, pese a su furioso anticlericalismo y a su declarada animadversión contra el cardenal Segura. Era indispensable utilizar la policía para dar con el paradero del prelado y, por tanto, había de contar con su jefe. Obtuve de él la promesa del más absoluto secreto, promesa que fue cumplida "religiosamente" por este "feroz ateo", como le calificaba la prensa de la derecha.

La noticia me llegó por conducto del gobernador de Guadalajara. Era esta autoridad D. José León Trejo, afiliado al partido socialista, por tanto, de extrema izquierda, pero que se condujo con una discreción, un tacto y un celo ejemplares. Me informó esta autoridad que, en el pueblo de Pastrana, se alojaba desde hacía tres días el cardenal con "un amigo", en la "rectoría", o sea en la casa del párroco. Se había averiguado la noticia por haberse cursado, en nombre del prelado, órdenes a todos los párrocos de la diócesis para que asistieran a una reunión que había de celebrarse, en Guadalajara, el domingo. Una de estas órdenes había caído en manos de la policía, y por ese hilo, se devanó el ovillo.

Las medidas que era preciso adoptar requerían cierta publicidad. Opté, sin embargo, por obrar antes por mi exclusiva cuenta, poniendo una vez más al Presidente y al Gobierno ante el hecho consumado, es decir, dándoles cuenta en un mismo acto de la aparición del cardenal y de su salida definitiva de España: era el único camino a seguir si quería evitar lo que hasta ese momento había logrado eludir, o sea el envenenamiento del problema por la prensa de izquierda, que nada sabía aún de lo ocurrido.

Pronto estuvo todo preparado. Por mí y ante mí -lo declaro hoy como lo declaré entonces, porque me gusta asumir las responsabilidades que me incumben- ordené al gobernador de Guadalajara que notificase al cardenal en mi nombre y con la máxima cortesía, pero a la vez con la máxima firmeza, la orden de acompañarle sin demora a la frontera de Irún. Cuando el gobernador se disponía a dirigirse a Pastrana para cumplimentar mis

órdenes, supo que el cardenal venía a Guadalajara precisamente para celebrar, al día siguiente, el domingo, la reunión con los párrocos de la diócesis que él había convocado.

Se hospedaba el cardenal en el convento de los Padres Paúles, y allí fue el gobernador a visitarle tan pronto como llegó. Le notificó mi orden. Se ha dicho que el cardenal ofreció resistencia. No es exacto. Se limitó a decir que no le parecía normal que se le expulsase de España sin decirle la causa por la que se adoptaba tal determinación. El gobernador no pudo sino manifestarle que cumplía órdenes del ministro. Como era ya tarde para emprender el viaje, se acordó hacerlo al día siguiente, muy de madrugada, tras la misa que el prelado diría en la capilla del convento.

Ordené al comisario de policía de Madrid, señor Maqueda, uno de los veteranos del cuerpo que me merecían de muy antiguo el mejor concepto, que fuese él quien acompañase hasta Irún al cardenal. Se trasladó Maqueda a Guadalajara aquella misma noche, y se presentó al prelado poniéndose a sus órdenes. A las seis de la mañana del domingo emprendieron el viaje, durante el cual fue tratado el cardenal con las atenciones debidas a su rango.

(...)

Al día siguiente, lunes, di cuenta de lo ocurrido al Presidente al Gobierno y a la Prensa. Como suponía, el hecho de dar a la vez cuenta de la presencia del prelado en España y de su expulsión por orden mía, simplificó totalmente la actitud de la noticia. Los diarios de extrema izquierda no podían sino dar cuenta de lo ocurrido, puesto que a todo habían de llegar menos a elogiar al ministro -que para ellos era la auténtica bestia negra- por su decisión, y tampoco podían censurarle en ocasión semejante. Los ministros aprobaron, sin excepción, la medida, pero...¡el Presidente!...¡No puedo relatar ahora con detalle la tormenta, el seísmo, que se desencadenó por teléfono primero, de viva voz después, en mi propio despacho donde compareció el gran Niceto a las primeras horas de la mañana del lunes!

(...)

Un periodista había tomado unas fotografías en la puerta del convento de los Paúles, en el momento de salir el cardenal, acompañado del comisario Maqueda y del gobernador. A cada lado de la puerta había un guardia civil, en posición de firme, elemental precaución adoptada por el gobernador. Pues bien, esa fotografía, reproducida a miles de ejemplares, sirvió durante los seis años de vida de la República, y de vez en cuando sigue sirviendo después de "liberados", para probar documentalmente la "saña feroz de un ministro servidor de los masones", que se llevaba a los cardenales y prelados al extranjero, poco menos que a calatazos de la Guardia Civil.

No causó mucho revuelo, como he dicho, la noticia. La prensa de la derecha, bien enterada de los factores que habían mediado en la determinación

ministerial; cuidó de no exagerar el tono de la protesta, temerosa de que yo pusiese las cartas sobre la mesa y todo fuese al traste.

El epílogo de este episodio lo rubricó, entonces ya, la Santa Sede. Un mes más tarde recibió el Gobierno la comunicación de Roma, por conducto del nuncio, "admitiendo la dimisión al cardenal don Pedro Segura de la Silla Metropolitana de Toledo" y dejándole adscrito en Roma a la Congregación de Preces.

Si, actualmente, hubiese menester de justificación de mi conducta, me bastaría alegar lo ocurrido luego con este cardenal, para quedar absuelto con todos los pronunciamientos favorables por el tribunal más severo.

22.- "Acción católica diocesana. Por la reintegración del Excmo. Prelado a su Diócesis".

Diversas fechas, *BOE de Vitoria*, año 67, 1 de agosto de 1931, págs. 543-551.

A los católicos vascos

Los suscritos, presidentes de las Juntas de Acción Católica de esta diócesis, en nombre de las mismas y de todas organizaciones adheridas, recogiendo el llamamiento que nuestro querido Prelado dirige a todos sus diocesanos en esta hermosísima Pastoral que, firmada en el destierro, ha conmovido los sentimientos más hondos de nuestro pueblo, se creen en la obligación, impuesta por la naturaleza de sus organizaciones, de dirigirse a todos los católicos del país a fin de realizar una acción común, que repare y en lo menester contenga los daños y peligros que un día y otro vienen concurriendo la paz de la Iglesia y el derecho de nuestras conciencias cristianas.

Entre la serie de hechos, harto dolorosos para que sea necesario su recuerdo, conviene destacar por la singularidad que para nosotros reviste, la expulsión de nuestro querido Prelado. Un día, el 17 de mayo, por motivos que nadie ha explicado todavía, pero que seguramente tuvieron su origen en las delaciones de un sectarismo, torpe y ciego hasta para sus propias conveniencias, recibió nuestro Obispo la orden de expulsión. Con la serenidad del mártir y recitando, entre el asombro y la edificación de los presentes, las palabras con que los Hechos de los Apóstoles conmemoran el gozo de éstos al padecer por Cristo las contumelias del farisaico Concilio, salió de su Palacio el Obispo ejemplar, sin una queja en los labios, conducido a la frontera sin otros miramientos ni solemnidades que el patio glorioso de la persecución.

El estupor que la noticia produjo en todos los ánimos no fué bastante, sin embargo, para ahogar la protesta que en el mismo día y movida por un mismo filial impulso las autoridades eclesiásticas, y con ellas la Acción Católica, privada de su Director diocesano, como va antes lo había sido de su Director pontificio el Cardenal Primado, hubo de elevar al Gobierno de la República. La voz del Gobierno, siempre deferente para otras expansiones menos respetuosas, no tuvo para nosotros ni las consideraciones de la cortesía, limitándose a la muda sentencia de su desdén.

La protesta de aquel instante ha venido resonando durante estos dos meses, sin treguas en el propósito ni desfallecimientos en la decisión. Miles de pliegos suscritos por todas las clases y condiciones sociales, llegaron a la Presidencia del Gobierno en imponente plebiscito, más digno de consideración por el respeto con que se formulaba acallando en reverencia a la autoridad constituida el ímpetu irrefrenable de la colectiva amargura.

La contestación, si alguna hubo fuera del sistemático silencio de las alturas, fueron multas, encarcelamientos y amenazas, que tuvieron al menos una doble virtud: la de encender en mayores terrores la protesta con el eco de una suscripción interminable y la de acrediarla con una insuperable ga-

ta. La garantía de su veracidad sellada oficialmente en el Gobierno civil por la persecución, que fué siempre gloria de las grandes empresas cristianas.

No por ello debemos desmayar. Recientemente nuestros diputados, mandatos acreditados de la voluntad del país, nos dan también el ejemplo enviando al Gobierno un edificante telegrama, útil expresión de los deseos del pueblo que los eligió.

La condición de todos los triunfos cristianos es la perseverancia, y la emplearemos hasta el fin, con la plena seguridad de la victoria. La Iglesia quiso, en sus afectos de Madre, ligar a Pastor y diócesanos con vínculos de espiritual paternidad que la gloria embellece y la caridad hace más íntimos y efectivos. Pero nuestro querido Prelado tiene, además, para nosotros títulos de singular afección que nos obligan a mayores esfuerzos. Hijos suyos por la fe y hermanos suyos por la raza, no podemos olvidar en su destierro al Prelado insignie, más nuestro cuanto más perseguido, gloria de la Iglesia y de nuestra tierra, contestando con la indiferencia a la nobleza de sus paternos afectos.

Y la mejor manera de corresponder a ellos es la de cumplir su voluntad, practicando reverentemente, sin reservas en la mente ni distinguos en la acción, las normas que acaba de ofrecernos en esa Pastoral reciente que, fechada en el destierro, parece un eco de aquellas epístolas con que los Apóstoles saludaban a los primeros cristianos ofreciéndoles el ejemplo de su fortaleza en la comunión de un mismo dolor y en la fe de unas mismas divinas esperanzas.

[Católicos vascos] La cruzada que hoy queremos comenzar con nuestra propia responsabilidad, pero a las órdenes siempre de la jerarquía eclesiástica, reclama el auxilio de todos. No se trata de añadiduras disputables ni de violencias perturbadoras. Pero se trata de nuestro honor de católicos, y debemos aprovechar hasta el último límite que nos señale la hostilidad de nuestros comunes adversarios, todos los medios legales, telegramas ahora, manifestaciones públicas, cuanto sea posible, después, para demostrar al Poder que la voluntad de nuestro pueblo es indomable cuando le acompaña la justicia.

[Sindicatos obreros y sindicatos agrarios, Juventudes Católicas, beneméritas organizaciones femeninas, legión... y propagandistas, juntas parroquiales y Asociaciones piadosas, la hora de la Acción Católica ha llegado.] ¡Católicos todos los de este católico país, llegó la hora de confesar a Cristo con el santo *descaro de la verdad*, frente a frente de quienes enemigos de su soberanía social, pretenden expulsarle de la vida pública para recluirle como un perturbador más en las sombras de los sagrarios. Pedimos el respeto a la fe de nuestros mayores, pedimos la santa libertad de nuestras conciencias cristianas, pedimos la soberanía de la Iglesia en el ejercicio de su divina misión y la consideración debida a sus sagrados ministros. Y por lo mismo urgentemente pedimos que se nos devuelva con todos los honores que corresponden a su cargo y a su persona, al Padre ejemplar y querido Prelado que padece persecución por la justicia.

[Católicos] El Papa nos bendice, el Obispo nos llama, el pueblo lo pide y la misma hostilidad de nuestros adversarios lo exige. ¡Adelante!, hasta que el Gobierno y las Cortes acaben de enterarse de la voluntad inquebrantable de este pueblo creyente. ¡Adelante!, unidos todos en la misma protesta hasta ver consagrada en la tierra que fué siempre suya, la soberanía social de Jesucristo, Maestro de la libertad

en el mundo y Señor alorado por todas las generaciones vascas.

14 de julio de 1933. — *Marqués de la Alameda*, presidente de la Junta de Alava. — *Conde de Lariz*, presidente de la Junta de Guipúzcoa. — *Esteban Bilbao*, presidente de la Junta de Vizcaya.

Obispo de Vitoria. — Anglet.

Los suscritos, en nombre de sus respectivas juntas y de todas las organizaciones adheridas, conmovidos por su hermosísima Pastoral, elevan a V. E. el testimonio de su devoción más fervorosamente sentida en estas horas de orfandad espiritual con que la Providencia ha querido probar en V. E. sus heroicas virtudes y en nosotros la firmeza de nuestros filiales sentimientos. Seguramente no son desconocidas para V. E. las dificultades que, oponiéndose a nuestras protestas agravan la amargura de su destierro. Sirvale de lenitivo la seguridad de que ni cárceles, ni multas podrán enbuiar la entereza de nuestra decisión hasta la hora anhelada en que la Providencia, premiando sus virtudes más que nuestros esfuerzos, nos lo devuelva glorificado por la persecución y enaltecido por la justicia.

Besan su pastoral anillo. — *Marqués de la Alameda*, *Conde de Lariz*, *Esteban Bilbao*.

Presidente Gobierno Provisional República. — Madrid.

Los suscritos, presidentes de las Juntas de Acción Católica de esta diócesis, en nombre de las mismas y de todas las entidades adheridas, reiteran a V. E. su protesta, tan enérgica como respetuosa, contra el dilatado destierro impuesto a nuestro virtuosísimo Prelado, recordándole la presentación de innumerables solicitudes todavía incontestadas y que obtenidas bajo la presión de amenazas, multas y encarcelamientos gubernativos, garantizan a ese Gobierno la realidad del público anhelo y la firmeza inquebrantable con que este país deplorea el agravio inferido en su Padre espiritual a los sentimientos religiosos de este pueblo católico. Esperamos que, más afortunados que otras veces, obtendremos ésta la solución justísima que la opinión pública reclama cada día con más insistentes apremios. — *Marqués de la Alameda*, *Conde de Lariz*, *Esteban Bilbao*.

Muy pronto y con perfecta unanimidad ha respondido la Diócesis de Vitoria a tan justificado llamamiento, como lo demuestran los centenares de telegramas que en estos días las columnas de la Prensa católica del País vasco.

Insertamos entre otros los siguientes:

Presidente Consejo de Ministros.

Madrid.

Cabildo Catedral Vitoria, lamentando vivamente prolongación injustificado destierro amadísimo Obispo diocesano, únese unánime fervorosamente razonadísima petición que, interpretando sentimientos Diócesis entera, han dirigido V. E. diputados vascos solicitando inmediata revocación orden destierro celosísimo Prelado reclamada por justicia y soberanía Iglesia conculcada.

Verástegui, presidente.

Obispo Vitoria.

Notre Dame. - Anglet.

Cabildo Catedral Vitoria complice reiterar amadisimo Obispo inquebrantable fervorosa adhesión al remitirle copia telegrama cursado acuerdo unanime presidente Gobierno solicitando inmediato reintegro V. E. Diócesis que ansiosamente le espera.

Verástegui, presidente.

Beneficiados Catedral Vitoria, adheridos justísima petición diputados vascos, interesan nuevamente retorno amadisimo Prelado diocesano.

Virgola, decono.

(En idénticos términos que el último cuando se dirigió por Rydos. Sres. Beneficiados otro mensaje al Excmo. Señor Obispo.)

Presidente Consejo de Ministros.

Rector, Profesores, alumnos Seminario Vitoria hacen suya la protesta formulada por diputados defensores Estatuto Vasco contra injustificado destierro Obispo diocesano y de nuevo piden a V. E. respetuosamente inmediata reintegración de tan santo Prelado a su amada Diócesis

Rector, Laspiur.

Obispo Vitoria.

Rector, Profesores, alumnos Seminario Diocesano, al leer conmovidos paternales palabras sentidísima Pastoral, reiteran a su amadisimo Prelado testimonio lítil devoción y adhesión inquebrantable, suplicando Señor abrevie para bien Diócesis días amargos injustificado destierro.

Rector, Laspiur.

Presidente Consejo Ministros.

Madrid.

Respetuosamente ocho párrocos Bilbao con el mayor ardor suplicamosle acuerde levantar improcedente extrañamiento de nuestro venerable Prelado que ansiamos verle restituido en su Sede con todos los honores y libertad a que él y nosotros tenemos derecho

Galbarrieta, arcipreste. Isusi, párroco de los Santos Juanes. Ledesma, párroco de San Anton. Abona, Párroco de San Vicente. Ichevarria, párroco de Santiago. - Azcárraga, párroco de San Nicolas. Astigarruga, párroco de Begoña. Elordi, párroco de Deusto

Obispo de Vitoria

Notre Dame. - Anglet.

Nombres párrocos Bilbao nuestro más efusivo saludo inquebrantable adhesión Hemos rogado Gobierno con la mayor insistencia desaparezca incomprensible extrañamiento ansiamos verle prontamente entre nosotros. Nos honramos por hijos fidelísimos.

Galbarrieta, arcipreste.

Presidente Consejo Ministros

Montepio Diocesano de Vitoria en nombre de sus asociados, solicita inmediato regreso amadisimo Prelado.

Presidente, Gurruchaga.

Cómanos también de diversos Ayuntamientos, multitud de Parroquias, principalmente de las capitales Vizcaya, Bilbao y San Sebastián. Obras misericordias penitenciales, Juntas parroquiales, Asociaciones públicas, Parroquias y Sindicatos, familias y personalidades católicas, ante de salir de esta Diócesis, como el Ilmo. Cabildo Catedral de San Domingo de la Calzada, que no cesan de pedir insistentemente la reintegración a su amada grey del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo.

• • •

La petición de los católicos Diputados a Cortes del País vasco, redactada con motivo del grandioso acto de despedida celebrado en Guernica el domingo día 12 de julio, ante una multitud de 35.000 espectadores, dice así:

«Presidente Gobierno provisional de la República.— Madrid.

Representantes legítimos de este pueblo, cuyo mandato acreditamos con el voto de una inmensa mayoría electoral obtenida sin ninguna justificada protesta, creeríamos traicionar la razón primordial de nuestras designaciones, si en este mismo día en que una innumerable multitud congregada en esta histórica capital fural a la sombra del Arbol secular que presidió sus mas solemnes deliberaciones nos lo exige clamorosamente, no hiciéramos llegar ante ese Gobierno el anhelo unánime de este pueblo que, resonando vigorosamente por todos los ámbitos de nuestro país, reclama con la firmeza de su carácter más pródigo en acciones que en discursos, el inmediato regreso de su querido Prelado vasco en cuya persecución considera escarnecidas a un tiempo y por una misma injusticia el carácter sagrado del desterrado y los más hondos sentimientos de sus conciencias cristianas.

Agotados todos los modos legales de la súplica tras un transcurso de dos meses más largos todavía para nuestra amargura que para la invención de un pretexto que supiera disimular siquiera la injusticia, requerimos solemnemente a ese Gobierno, sin perjuicio si todavía perdurase su desdenoso silencio de someterlo como último trámite legal a la consideración de las Cortes, a que considere la inmensa responsabilidad que adquiere haciendo ineficaces todos los caminos de la legalidad para todo un pueblo que al sentirse herido en lo más vivo de su espíritu no habría de conocer el advenimiento de la prometida libertad más que por el dolor de sus flagelaciones.

En el descargo de nuestro deber, por el honor y conveniencia misma de la República, por la seguridad de aquellos derechos que, consagrados al frente de todas las constituciones se llaman inviolables, por la paz pública y por el imperio de la justicia que repugna toda sanción, imotivada en la publicidad de su escándalo y misteriosa en el origen de sus resoluciones, y sobre todo por el respeto que se debe a la soberanía de la Iglesia en el orden de sus fueros, si las súplicas no valieran, reclamamos con todas las solemnidades necesarias en nombre de todos nuestros representados, sumando con ellos a quienes no por carecer del voto carecen también

del derecho de la ciudadanía, el inmediato regreso de nuestro Prelado con todos los pronunciamientos que corresponden a la condena del tirano, al decoro de la inocencia y al sagrado carácter de obispo.

Le saludan: *Antonio de Pildain, José Horn y Arelliza, Marcetino de Oteja, José Antonio de Aguirre, Julio Urquiza, Manuel Eguibar, Rafael Picavea, Francisco Basterrichea, Jesús María de Letañola, José Luis de Oriol.*

Suscrito por los mismos señores firmantes se envió el siguiente:

Obispo Vitoria. —Anglet.

En nombre de una inmensa multitud procedente de todos los pueblos de su diócesis y congregada en esta histórica villa al pie del Arbol símbolo de nuestra fe y de nuestras libertades cristianas elevamos a V. E. el eco de las aclamaciones entusiastas que aquí resueñan como un mensaje de amor al Padre desterrado y expresión firme de la enérgica protesta que elevamos al Gobierno contra la injusta persecución que al expulsarle de nuestro lado ha tenido la virtud de adentrarle más hondamente en lo más íntimo de nuestros corazones.

Obedientes al mandato que acabamos de recibir de nuestros electores, prometemos solemnemente a V. E. la realización de todos los esfuerzos conducentes a la plena reparación de la escandalosa injusticia que si V. E. padece con evangélica paciencia, nosotros no podemos tolerar sin mengua de nuestro deber.

Firmes en nuestro propósito de defender ante las Constituyentes, cueste lo que costare, los ideales religiosos que fueron siempre la fe de nuestra raza, solicitamos de rodillas y con todo el fervor de nuestras conciencias cristianas su apostólica bendición, deseando que ella nos comunique la entereza ejemplar con que V. E. nos enseñó a defender los sagrados derechos de la Iglesia de Cristo.

Besan reverentes su pastoral anillo»

Telegrama del Excmo. Prelado

El M. I. Sr. Rector del Seminario Diocesano, recibió el siguiente.

Transmite tectoral, compañeros diputados, cordialísima gratitud emocionante telegrama ayer. Cuenten oraciones, efusiva bendición.

Obispo de Vitoria

Posteriormente durante la visita que hicieron en Madrid al presidente del Gobierno Provisional los diputados del grupo vasco-navarro pro Estatuto, el jefe de la minoría, señor Beunza, hizo ver al señor Alcalá Zamora el deseo de todos los vascos por ver el más pronto regreso a su Diócesis del Excmo. Sr. Obispo doctor Múgica, por considerar completamente injustificado y arbitrario el destierro del Prelado, resaltaron el afecto que toda la Diócesis profesa a su celoso Prelado.

23.- "La promesa de España.- Comunismo, fascismo, reacción clerical y problema agrícola"

"El Sol", 14 de mayo de 1931

(Artículo de don Miguel de Unamuno exclusivamente para el "New York Times" y EL SOL)

El comunismo no es, hoy por hoy, un serio peligro en España. La mentalidad, o, mejor, la espiritualidad del pueblo español no es comunista. Es más bien anarquista. Los sindicalistas españoles son de temperamento anarquista; son en el fondo, y no se me lo tome a paradoja, anarquistas conservadores. La disciplina dictatorial del sovietismo es en España tan difícil de arraigar como la disciplina dictatorial del fascismo. Los proletarios españoles no soportarían la llamada dictadura del proletariado. A lo que hay que añadir que, como España no entró en la Gran Guerra, no se han formado aquí esas grandes masas de ex combatientes habituados a la holganza de los campamentos y las trincheras, holganza en que se arriesga la vida, pero se desacostumbra el soldado al trabajo regular y se hace un profesional de las armas, un mercenario, un pretoriano. Los mozos españoles que volvían de Marruecos volvían odiando el cuartel y el campamento. Y el servicio militar obligatorio ha hecho a nuestra juventud de tal modo antimilitarista, que creo se ha acabado en España la era de los pronunciamientos. Y, con ello, la posibilidad de *soviets* a la rusa y de *fasci* a la italiana. Y si es cierto que tenemos un Ejército excesivo -herencia de nuestras guerras civiles y coloniales-, este Ejército se compone de las llamadas clases de segunda categoría, de oficialidad y de un generalato monstruoso. Todo este terrible peso castrense es de origen económico. El Ejército español ha sido siempre un Ejército de pobres. Pobres los conquistadores de América, pobres los tercios de Flandes. La alta nobleza española, palaciega y cortesana, ha rehuido la milicia. Y ese Ejército formaba y aún forma -hoy con la Gendarmería, la Guardia de Seguridad y hasta la Policía- algo así como aquella reserva de que hablaba Carlos Marx. Son el excedente del proletariado a que tiene que mantener la burguesía. El ejército profesional es un modo de dar de comer a los sin trabajo. El cuartel hace la función que en nuestro siglo XVII hacía el convento. Pero ya hoy muchos de los que antes iban frailes se van para guardias civiles.

No creo, pues, que haya peligro ni de comunismo ni de fascismo. Cuando al estallar la sublevación de Jaca, en diciembre del año pasado, el Gabinete del rey y el rey mismo voceaban que era un movimiento comunista, sabían que no era así y mentían -don Alfonso mentía siempre, hasta cuando decía la verdad, porque entonces no la creía-, y mentían en vista al Extranjero. Y ahora todas esas pobres gentes adineradas y medrosas se

asombran, más aún que del admirable espectáculo del plebiscito antimonárquico, de que no haya empezado el reparto. Y los que huyen de España, llevándose algunos cuanto pueden de sus capitales, no es tanto por miedo a la expropiación comunista cuanto a que se les pidan cuentas y se les exijan responsabilidades por sus desmanes caciquiles.

Añádase que en estos años se ha ido haciendo la educación civil y social del pueblo. Es ya una leyenda lo del analfabetismo. El progreso de la ilustración popular es evidente. Y en una gran parte del pueblo esa educación se ha hecho de propio impulso, para adquirir conciencia de sus derechos. España es acaso uno de los países en que hay más autodidactos. Hoy, en los campos de Andalucía y de Extremadura, en los descansos de la siega y de otras faenas agrícolas, los campesinos no se reúnen ya para beber, sino para oír la lectura, que hace uno de ellos, de relatos e informes de lo que ocurre en Rusia. "Temo más a los obreros leídos que a los borrachos", me decía un terrateniente. Y en cuanto a la pequeña burguesía, a la pobre clase media baja, jamás se ha leído como se lee hoy en España. Sólo los ignorantes de la historia ambiente y presente pueden hablar hoy de la ignorancia española. Como tampoco de nuestro fanatismo.

Porque, en efecto, si no es de temer hoy en España un sovietismo o un fascismo a base de militarismo de milicia, tampoco es de temer una reacción clerical. El actual pueblo católico español -católico litúrgico y estético más que dogmático y ético- tiene poco o nada de clerical. Y aquí no se conoce nada que se parezca a lo que en América llaman fundamentalismo, ni nadie concibe en España que se le persiga judicialmente a un profesor por profesar el darwinismo. El espíritu católico español de hoy, pese a la leyenda de la Inquisición -que fue más arma política de raza que religiosa de creencia-, no concibe los excesos del cant puritanesco. Aquí no caben ni las extravagancias del Ku-Klux-Klan ni los furores de la ley seca en lo que tengan de inquisición puritana. Ahora, que acaso no convenga en la naciente República española la separación de la Iglesia del Estado, sino la absoluta libertad de cultos y el subvencionar a la Iglesia católica, sin concederle privilegios, y como Iglesia española, sometida al Estado, y no separada de él, Iglesia católica, es decir, universal, pero española, con universalidad a la española, pero tampoco de imperialismo. Se ha de reprimir el espíritu anticristiano que llevó al episcopado del rey y al rey mismo a predicar la cruzada. Los jóvenes españoles de hoy, los que se han elevado a la conciencia de su españolidad en estos años de Dictadura, bajo el capullo de ésta, no consentirán que se trate de convertir a los moros a *cristazo* limpio. Y en esto les ayudarán sus hermanas, sus mujeres, sus madres. Y a la mujer española, sobre todo a la del pueblo, no se la maneja desde el confesionario. Y en cuanto a las damas de acción católica, su espíritu -o lo que sea- es, más que religioso, económico. Para ellas el cielo no es más que gendarmería.

Hay el problema del campo. Mientras en una parte de España el mal está en el latifundio, en otra parte acaso más poblada, el mal estriba en la excesiva parcelación del suelo. El origen del problema habría que buscarlo en el tránsito del régimen ganadero -en un principio de trashuman-
cia- al agrícola. Las mesetas centrales españolas fueron de pastores y de bosques. Las roturaciones han acabado por empobrecerlas, y hoy, mientras prosperan las regiones que se dedican al pastoreo y a las industrias pecuarias, se empobrecen y despueblan las cerealíferas. Más éste, como el de la relación entre la industria -en parte, en España, parasitaria- y la agricultura, es problema en que no se puede entrar en estas notas sobre la promesa de España.

Miguel de UNAMUNO

24. - 4 de julio de 1931. Carta Pastoral de Su Emcia Rvma.
sobre los deberes del cargo pastoral.

SCE de Toledo, año 37, 8 de julio de 1931, núm. 13, págs. 221-223.

EL CARDENAL ARZOBISPO DE TOLEDO
AL CLERO Y FIELES DEL ARZOBISPADO

VENERABLES HERMANOS Y AMADOS HIJOS: A medida que los días transcurren Nos urge más y más el cumplimiento de los graves deberes de nuestro cargo pastoral, sobre los que Nos ha de pedir estrecha cuenta el Supremo Pastor de los Pastores.

NUESTRO SILENCIO

Con reverencia filial, que mucho os honra, habéis sabido respetar Nuestro silencio, que gustosamente hemos ofrecido al Señor, cuando tantas y tantas causas Nos incitaban vehementemente a hablar.

Hoy, haciendo Nuestras las palabras de San Hilario (Lib. adv. Constantium), podemos decir: *Uterius tacere diffidentius signum est, non molestiae ratio, quia non minoris periculi est semper tacuisse quam nunquam*. «Callar por más tiempo fuera no prueba de moderación, sino nuestra de cobardía, porque no hay menos peligro en callar siempre que en hablar de continuo».

Si sólo atendiésemos a conveniencias temporales, fuera ciertamente preferible el callar en circunstancias como las presentes; mas apremia la voz de la conciencia, que no Nos es dado desoir, aunque por ello hubiéramos de afrontar nuevos sufrimientos.

Humilitatis mea immemor, decía el mismo Santo Doctor (*De Synodo ado. Arianos*) de tantas rebus amore vestri concitus hanc scripsi, et quae ipse credebam iniquitas sumi, conscius mihi hoc Ecclesiae militiae meae stipendium debere, et per has litteras Episcopatus mei in Christo vocem secundum doctrinas evangelicas destinasse. «Si hemos olvidado lo poco que somos, para hablaros de cosas tan graves, Nos ha forzado a ello el amor que os tenemos. Es nuestra fe la que nos obliga a hablar. La conciencia nos es testigo de que así pagamos a la Iglesia una parte del estipendio de nuestro cargo militante, ofreciéndole, por medio de esta carta, basada en las doctrinas evangélicas, la voz de nuestro Episcopado».

Únicamente, Venerables Hermanos y muy amados Hijos, la voz de *Nuestro Episcopado*, exenta de toda clase de resentimientos y de pasiones, es la que, al imperio de un deber de conciencia, brota hoy de Nuestros labios, dispuestos por lo demás, a haber guardado perpetuo y absoluto silencio.

No Nos es posible callar cuando peligran los sagrados intereses de la gloria de Dios y del bien de las almas que Nos están confiadas, como decía Su Santidad recientemente en su Encíclica «Non abbiamo» de 29 de junio próximo pasado: «No hemos recibido nuestro cargo pastoral de manos de un hombre mortal, llámese Jefe del Estado o del Gobierno, sino del mismo Espíritu Santo, que Nos puso a regir la parte de la Iglesia de Dios, que Pedro Nos ha señalado».

¡Qué ejemplo más admirable de esta santa intrepidez en el cumplimiento del deber del «Ministerio de la palabra» nos acaba de dar el Soberano Pontífice en el sermón que pronunció el 21 de mayo último en el Aula consistorial, aludiendo a los hechos sucesos de la persecución de la Iglesia en Italia (*Acta A. Sedis*, vol. XXIII, pag. 200).

Lo decíamos ayer tarde a los Hijos de B. Rosca: lo repetimos a vosotros, amados Hijos, y al mundo: «*Nos puede pedir la vida, no el silencio*, cuando se hace mofa de aquello que constituye la predilección conmovedora de Nuestro corazón y del Corazón de Dios, cuyas veces hacemos».

Somos depositarios de un tesoro riquísimo, del tesoro divino que Jesucristo confió a su Iglesia, y, cuando estos sagrados intereses lo reclaman, no Nos es lícito callar como si se tratara de cosas dejadas por entero a Nuestro arbitrio o al de los nombres.

¡Qué propiamente nos describe San Vicente de Lerins (en su *Commonitorio*) la naturaleza de este divino depósito: *Quod tibi creditum, non quod a te inventum; quod accepisti, non quod excogitasti; rem non ingenii, sed doctrinae; non usurpationis praeconae, sed publicae traditionis; rem ad te perductam, non a te profectam; in qua auctor non debes esse, sed custos*. Es tesoro «que se nos ha confiado, no que nosotros hemos inventado; que hemos recibido, no que hemos ideado; no de ingenio, sino de doctrina; no de usurpación privada, sino de pública tradición; que se nos ha transmitido, no que nosotros hemos descubierto, y del cual no somos los autores, sino los guardadores.»

¡Ah! ¡Si con tanta fidelidad y con tanta fortaleza defendiésemos este sagrado tesoro de nuestra fe, que estuviésemos prontos a dar por él hasta nuestra vida!

Difícilmente podremos hallar palabras que más propiamente expresen Nuestro pensamiento en estos momentos, que aquellas con que significa el Padre Santo, en su última Carta Encíclica, los motivos que le impulsan a dirigirse al mundo ecuménico: «Sentimos la necesidad y el deber de dirigirnos y como venir en espíritu a cada uno de vosotros, venerables Hermanos, ante todo para cumplir *un grave y urgente deber de gratitud fraterna*; en segundo lugar, para satisfacer a otro *no menos grave y urgente deber de defensa hacia la verdad y la justicia*, en materia que, relacionándose con vitales intereses y derechos de la Iglesia, se relaciona también con todos y cada uno de vosotros...»

NUESTRA GRATITUD

Está muy lejos, pues, de Nuestro ánimo consignar, ni en esta carta ni en ninguno de los documentos pastorales que con el favor de Dios hayamos de publicar, una sola palabra que pueda ceder directamente en defensa de Nuestra persona atropellada, ni en vindicación de Nuestro honor, que ha sido por tantos medios ultrajado con toda suerte de calumnias y con apreciaciones y suspicacias tan injuriosas como en absoluto infundadas.

Impulsan Nuestra pluma móviles más nobles y generosos, que del cielo vienen y al cielo se encaminan, y son los de la gratitud que inunda Nuestro corazón en estos momentos de prueba, que el Señor en su misericordia ha querido sean también de íntima consolación.

Estos sentimientos de gratitud, Nos obligan, en primer termino, a levantar los ojos a lo alto, «de donde Nos ha venido el auxilio», para dar gracias a Dios Nuestro Señor y al Corazón amantísimo de Jesucristo nuestro divino Redentor, que así se ha querido acordar de Nuestra pequeñez para regalarnos con una de sus más preciadas bienaventuranzas: «Dichosos, nos decía en el sermón de la montaña (Mat. V-11, sq.), dichosos seréis cuando los hombres, por mi causa, os maldijeren y os persiguieren y dijeren con mentira toda suerte de mal contra vosotros. Alegraos entonces y regocijaos, porque es muy grande la recompensa que os aguarda en los cielos. Del mismo modo persiguieron a los Profetas que hubo antes de vosotros.»

¡Ah! ¡Si en nuestras tribulaciones y persecuciones aprendiésemos a esperar en el Señor! ¡Con qué dulce y firme confianza, cuando los hombres en medio de la prueba nos desamparan, debiéramos repetir aquellas palabras, tan verdaderas, del Salmo (Ps. XVII-1, sq.): «A Ti he de amarte, oh Señor, que eres toda mi fortaleza. El Señor es mi firme apoyo, mi asilo y mi libertador. Mi Dios es mi socorro y en El esperaré. El es mi protector y mi poderosa salvación y el amparo mío.»

¿Qué importa que los hombres no garanticen Nuestra vida, si la tenemos por entero puesta en manos del Señor, y podemos clamar con el Profeta Rey, perseguido por sus enemigos: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? El Señor es el defensor de mi vida, ¿quién me hará temblar? Mientras que están para echarse sobre mí los malhechores para devorarme; esos enemigos míos, que me atribulan, esos mismos han sido quebrantados y derribados. Aunque acampen ejércitos contra mí, no temblará mi corazón... Una sola cosa he pedido al Señor, esa solicitaré: que yo pueda vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida» (Pa. XXVI-1, sq.).

No resta sino repetir a impulsos del agradecimiento con David (Pa. XXVII-6, sq.): «*Alabado sea el Señor*, pues oyó la voz de mi humilde ruego. El me auxilia y me protege; en El esperó mi corazón y fué socorrido.»

En su gran misericordia ha querido unir el consuelo, defensa y protección, que el Señor por sí mismo nos prodiga, el amparo maternal que nos dispensa en nuestras adversidades y persecuciones, por medio de Nuestra santa Madre la Iglesia Católica.

¿Cómo se ha venido a cumplir fielmente en la santa Iglesia aquella profecía de Isaías (Is. LXVI-12): «Como una madre acaricia a su hijo pequeño, así Yo os consolaré a vosotros y hallaréis nuestra paz y consolación en Jerusalén», en la Jerusalén nueva que es la Iglesia de Jesucristo.

No Nos es posible, venerables hermanos y amados Hijos, hablarlos sin honda emoción en los consuelos que Nos ha proporcionado en los días de mayor amargura nuestra Santa Madre la Iglesia.

Era la Iglesia la que, al recordarnos que su patrimonio, su herencia, son las persecuciones: «Si me perseguunt sicut et vos persequetur» (Jo. XV-20), Nos alentaba con el ejemplo y la promesa de su divino Fundador.

Era la Iglesia quien, poco ha, en Roma, Nos hablaba por boca de Pedro, que sigue rigiéndola en la persona de Su Santidad el Papa Pío XI, que tuvo para Nos en aquellas horas tristes delicadezas paternales y deferencias de predilección, a las que nunca podremos debidamente corresponder, y que de nuevo Nos obligan de por vida a una fidelidad inquebrantable y a una adhesión absoluta y perpetua. La Iglesia, la que, por medio del Papa, Nos confortaba y con efusión Nos bendecía a Nuestro regreso a la Patria, cuando, en la tarde, para Nos memorable, del 7 de junio, fuimos a pedirle, en conformidad con lo prescrito en el canon 238, párrafo 2, la licencia que necesitábamos para salir de Roma y volver a España, según lo teníamos determinado: licencia que Su Santidad Nos concedió benignísimamente.

Era la Iglesia la que Nos hizo sentir su influjo maternal en la acogida fraternal y carísimísima que Nos dispensaron los miembros todos del Sagrado Colegio Cardenalicio, compartiendo Nuestras penas y las de la Iglesia española con motivo de los tristes sucesos que aquellos días comentaba la prensa de todo el mundo.

Ignoran la verdad (no podemos suponer otra cosa) quienes han llegado a decir que hay divergencia de criterio y de conducta en el Episcopado español en los momentos actuales. Tenemos pruebas irrecusables de la unión estrechísima espiritual de todos Nuestros venerados Hermanos en el Episcopado, de los que hemos recibido y estamos recibiendo unánimes e inequívocas pruebas de afecto, de adhesión y de condolencia.

Porción escogida de la Santa Iglesia sois vosotros, mis Venerables Hermanos y amados Hijos, a quienes podemos aplicar aquellas palabras que el divino Maestro decía a sus discípulos (Luc. XXII-28): «Vosotros sois los que constantemente habéis perseverado conmigo en mis tribulaciones.»

Aunque en diversas ocasiones, agradecidos a vuestras bondades, os lo hemos repetido, nunca con más propiedad y verdad y más gratitud que ahora, ante las manifestaciones de afecto filial que de Nuestro ejemplarísimo Clero y de Nuestro amabilísimo pueblo hemos recibido durante Nuestro destierro, os podemos decir aquellas palabras del Apóstol: «Pero en cuanto a Nosotros, Hermanos, después de haber estado por un poco de tiempo separados de vosotros con el cuerpo, no con el corazón, hemos deseado con tanto más ardor y empeño volveros a ver. Por esto quisimos pasar a visitaros... Porque ¿cuál es nuestra esperanza, nuestro gozo y la corona que formará nuestra gloria? ¿No sois vosotros delante de Nuestro Señor Jesucristo para el día de su advenimiento? Sí, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo» (I Tesal., II, 17, ss.).

Y con vosotros hemos visto, con singular consuelo, unidos en esta ocasión a tantos y tantos preclaros sacerdotes y fervientes católicos de toda España y aun del extranjero, que, con acentos vibrantes en la prensa, con sus cartas sentidísimas y mensajes de adhesión fervorosa, han testimoniado en Nuestra persona su amor a la Santa Iglesia, nuestra común Madre, en estos aciagos tiempos tan cruelmente perseguida por sus enemigos.

Gracias muy rendidas debemos a Dios por la merced señaladísima de ser hijos de la Iglesia, que tan tiernamente nos ama, tan solícitamente nos cuida y tan poderosamente nos defiende.

NUESTRO DEBER

En justa correspondencia a todos estos motivos de gratitud pesan sobre Nos, por razón de Nuestro cargo pastoral, obligaciones especiales, que no es posible declinar sin gravar Nuestra conciencia.

Es la primera la de daros ejemplo, perdonando generosamente y de todo corazón a todos Nuestros enemigos y respondiendo con beneficios a sus persecuciones y con amor a sus odios.

Es éste uno de los caracteres inconfundibles de la verdadera caridad cristiana, que brota del Corazón de Aquel que dió su vida por los mismos que le clavaron en la Cruz, desde la cual imploró el perdón para sus enemigos, «no maldiciendo cuando se le maldecía y no amenazando cuando se le atormentaba» (I Petr. II, 23).

Dichosos nosotros cuando se nos presente ocasión de atestiguar con el Apóstol (I Cor. IV, 12 ss.): «Somos maldecidos y bendecimos, padecemos persecución y la sufrimos con paciencia, nos ultrajan y elevamos suplicas; somos, en fin, tratados como la basura y las heces del mundo y como la escoria de todos».

Cuando esta caridad verdadera nos anima, mueve nuestros labios no a palabras de execración y de venganza, sino de clemencia y de plegarias, que os rogamos Nos ayudeis a elevar al Cielo para que el Señor *auferat velamen de cordibus eorum*, «corra el velo que cubre sus corazones».

Tristísima sobre todo y digna de lástima es la situación en que se encuentran principalmente aquellos que, arrastrados por su ceguedad, han incurrido en los anatemas de excomunión de la Iglesia, fulminados contra los que violan algunos de sus imprescriptibles derechos.

Quiera el Señor, rico en misericordias, apiadarse de ellos, y tornarlos al camino del arrepentimiento, que es el único que conduce a los pobres extraviados a la vida verdadera de la gracia.

Constituido, Venerables Hermanos y muy amados Hijos, por la gracia de Dios y por la benignidad de la Sede Apostólica Obispo y Pastor de vuestras almas, sentimos como nunca en estos instantes el peso de Nuestros deberes pastorales, que a tanto Nos obligan.

Cuán hermosamente declaraba estos deberes el Papa Pío IX en su carta *Qui pluribus*, de 9 de noviembre de 1846: «No dudamos, decía a los Obispos del mundo católico el Vicario de Jesucristo, que todos vosotros, inflamados de la más viva caridad para con Dios y los hombres, ardiente en sumo amor hacia la Iglesia, dotados de virtudes casi angelicales, provistos de fortaleza episcopal y de prudencia, animados

de unas mismas santas y rectísimas aspiraciones, siguiendo las huellas de los Apóstoles e imitando a Jesucristo, ejemplar de todos los Pastores... estais dispuestos, a ejemplo del Pastor del Evangelio, a buscar con amor a las ovejas extraviadas y que están a punto de perecer. No dudamos que, habiéndolas hallado, las pondreis con afecto paternal sobre vuestros hombros; que las volvereis al redil y que no perdonareis cuidados, ni consejos ni trabajos para cumplir religiosamente todos estos deberes de vuestro cargo pastoral. Estamos persuadidos de que defendereis de la rabia y de las insidiosas acometidas de los lobos rapaces a todas vuestras ovejas, de Nos tan amadas, y redimidas con la preciosísima sangre de Jesucristo. Sabemos que, apartándolas de los pastos venenosos, las llevaréis a los saludables, y que, con vuestras obras, con vuestras palabras y con vuestro ejemplo, las conduciréis al puerto de la eterna salvación».

He aquí, Hermanos e Hijos queridísimos, un compendio preciosísimo de nuestros deberes pastorales, el programa completo de acción episcopal, que Nos proponemos al comienzo de Nuestro Pontificado, y que vivamente anhelamos poder llevar a cabo entre vosotros.

Se trata de deberes sacratísimos, que sobre Nos pesan mientras la Santa Sede de ellos no Nos releve, y que, en momentos tan apremiantes y críticos para el bien de vuestras almas, se Nos impide cumplir con la libertad y eficacia necesarias.

En pocas ocasiones del ministerio pastoral se cumplirá como en la presente el *percutiam pastorem et dispergentur oves gregis*, «heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño» (Mat. XXII-31).

Protestamos solemnemente ante Dios y ante vosotros, amadísimos Hijos, de la violencia moral y física con que se nos obligó a abandonarnos en las dos ocasiones en que se Nos ha forzado a salir de nuestra querida Patria, y con que se Nos retiene fuera de ella; y reclamamos instantemente Nuestro regreso inmediato a Nuestra amadísima Archidiócesis.

Tenemos, además, el deber de procurar, en unión con Nuestros Hermanos en el Episcopado y bajo la filial obediencia al Soberano Pontífice, la mayor gloria de Dios y el mayor bien de la Iglesia.

Ved con qué palabras lo declara el Padre Santo en la Encíclica ya citada: «Procurad, pues, animosamente, Venerables Hermanos, la mayor gloria de Dios y de la Iglesia, y trabajad con presteza, solicitud, vigilancia y unión en disipar todos los errores, desarraigar todos los vicios y en lograr mayores crecimientos de día en día en la fe, la religión, la piedad y la virtud. Haced que todos los fieles, renunciando a las obras de las tinieblas, se conduzcan dignamente, como hijos de la luz, buscando en todo agradar a Dios y producir el fruto de las buenas

obras. No os atemoriceis en medio de tantas angustias, dificultades y peligros, que cercan a vuestro ministerio pastoral, singularmente en los tiempos actuales, sino antes bien confortaos en el Señor y en el poder de Aquel «que, contemplando desde lo alto a los que nos hallamos en el fragor de la batalla por la gloria de su nombre, ve la sinceridad de nuestros corazones, nos anima en la pelea y nos corona en la victoria.» (S. Cipriano ep. 77.)

Lucha tan antigua como nueva es esta en la que tenemos asegurada la victoria, si legítimamente peleamos con nuestras armas (II Cor. X-4), «que no son carnales, sino que son poderosísimas en Dios para derrocar fortalezas, destruyendo nosotros con ellas los designios humanos o sondas con que se combate nuestra fe, y toda altanería de espíritu que se enciege contra la ciencia o el conocimiento de Dios, y cautivando todo entendimiento a la obediencia de Cristo».

Bien seguros pueden estar quienes de Nos y de Nuestras intenciones recelan, de que jamás hemos pensado sino en el cumplimiento de los deberes de Nuestro sagrado ministerio, al tenor de las enseñanzas de la Iglesia.

Ni una sola palabra, ni un solo hecho se podrá aducir que contrarie estas enseñanzas.

Reprobamos y reprobaremos siempre con sinceridad apostólica cuanto, bajo cualquier régimen, se haya opuesto o se oponga a los derechos inviolables de Jesucristo y de su Iglesia.

Respecto a la forma de régimen, en sí misma, os inculcamos una vez más la doctrina católica, que se contiene en las palabras del Soberano Pontífice León XIII, en su Carta *Immortale Dei*, y que reproduce nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI en su reciente Encíclica *Quadragesimo anno*: «Vix necesse est commemorare quod Leo XIII de politici regiminis forma docuit...: nimirum integrum esse hominibus quam maluerint formam eligere dummodo et iustitiae et boni communis necessitatibus sit consultum.» «Apenas, dice Su Santidad, hay necesidad de recordar lo que enseñó León XIII sobre la forma del régimen político... a saber, que es libre a los hombres escoger la forma que prefieran, con tal que queden atendidas la justicia y las necesidades del bien común.»

Y no terminaremos sin cumplir con Nuestro deber de insistir cerca de vosotros sobre el respeto y la obediencia debida a los poderes públicos, valiéndonos para ello de las palabras gravísimas de Pío IX en su mencionada Encíclica *Qui pluribus*: «Inculcad, dice a los Obispos, diligentemente al pueblo cristiano la debida obediencia y sujeción a los príncipes y a los poderes, enseñándoles, según la doctrina del Apóstol (Rom. XIII-12), que no hay potestad que no venga de Dios, y que los

que resisten a la autoridad resisten al orden por Dios establecido, y se hacen reos de condenación, y que, por consiguiente, *nadie puede violar sin hacerse culpable el precepto de obedecer a la autoridad, a no ser que se mande algo que sea contrario a las leyes de Dios y de la Iglesia.*

Corraremos esta breve carta con las palabras del Apóstol San Pedro en su primera Carta (II-13 ss.): «*Estad sumisos a toda humana criatura que se halle constituida sobre vosotros, y esto por respeto a Dios... Pues esta es la voluntad de Dios: que, obrando bien, hagáis conmutar a la ignorancia de los hombres necios e insensatos; como libres sí, mas no cubriendo la malicia con capa de libertad, sino obrando en todo como siervos de Dios, esto es, por amor. Honrad a todos; amad a los hermanos; temed a Dios.*»

Pidiendo para todos, Venerables Hermanos y amados Hijos, copiosísimas gracias, y suplicando instantemente vuestras oraciones, os enviamos de corazón la bendición pastoral en el nombre del † Padre y del † Hijo y del † Espíritu Santo.

En Nuestra Señora de Bel-lac (Francia), a 4 de Julio de 1931.

† PEDRO, CARDENAL SEGURA Y SÁENZ,
Arzobispo de Toledo.

Por mandado de Su Excel. Rvdma. el
Cardenal Arzobispo, mi Señor,

DR. BENITO MUÑOZ DE MORALES
Secretario Canciller.

(Esta Carta Pastoral será leída al pueblo en la forma acostumbrada.)

**25.--"Carta de Su Emcia. Rvdma. al Sr. Presidente del
Gobierno provisional de la República."**

20 de julio de 1931. *BOE de Toledo*, año 87, 23 de julio de 1931, núm. 14, págs. 237-242.

Con fecha 3 de junio próximo pasado dirigí a V. E., en calidad de Presidente del Gobierno Provisional de la República Española, una Exposición en nombre de los Rvdmos. Metropolitanos, en conformidad con el sentir de todo el Episcopado de nuestra Patria.

Este documento no ha tenido otra contestación que las siguientes palabras de la carta que V. E. tuvo a bien dirigirme con fecha 17 del pasado mes de junio: «En relación con ese otro documento, prestando de que algunos de los motivos de protesta eran conjetura o rumor; de que todos ellos, sea cual fuere el criterio de partido o tendencia sobre el fondo o solución, se reconocen unánimemente en el Derecho político moderno como pertenecientes a la esfera jurisdiccional del mismo; y de que en algún pequeño problema, como el relativo a las Ordenes Militares, sólo se trata en la vida contemporánea de exterioridades honoríficas y debilidades aristocráticas, sin la más remota conexión actual con la espiritualidad religiosa».

He formado el decidido propósito de no recoger ni una sola de las afirmaciones que con relación a mi persona contiene su mencionada carta. Dejo la justa apreciación de mis obras, de mis palabras y de mis intenciones al juicio de Dios.

— — —

Mas, si puedo generosa y noblemente renunciar a mi justificación y defensa en todo aquello que ceda en mi perjuicio y en mi deshonra personal, no está en mi mano dejar pasar por alto cuanto redunde en dano de los sagrados intereses de Nuestra Santa Madre la Iglesia Católica.

Me veo en la precisión de responder brevemente a V. E., no se fuera a interpretar mi silencio como conformidad con el criterio por V. E. emitido.

Muy lejos de mi intención está suscitar ninguna polémica en esta carta: desco únicamente hacer constar a V. E. que lamento vivamente no sólo que haya sido desatendida en absoluto la petición del Episcopado, sino que ni aun haya merecido una contestación cual correspondía a la importancia del objeto de la reclamación y a la dignidad de la sagrada Jerarquía de la Iglesia española.

No puede menos de lastimar a los buenos hijos de la Iglesia y a sus Pastores que no haya tenido V. E. en su respuesta una sola palabra de exoneración para los hechos, que motivaron aquellas gravísimas palabras del Episcopado: «A la más enérgica protesta de todos los buenos españoles, suscitada por los incendios de Iglesias, Conventos y Palacios Episcopales, se une en nombre de todo el Episcopado la de los Metropolitanos, que lamentan vivísimamente no sólo los incalculables daños ocasionados, cuya legítima reparación reclaman, sino principalmente los sacrilegios y profanaciones con este motivo perpetrados».

No he de aludir a la afirmación con que comienza a tratar de desvirtuar las reclamaciones del Episcopado, diciendo que «algunos de los motivos de protesta eran conjeturas o rumor», porque es manifiesta a todas luces su inconsistencia.

Las reclamaciones se refieren, o a decretos publicados en la «Gaceta», o a notas oficiales; y desgraciadamente todas ellas han sido provocadas por hechos muy sensibles realizados en virtud de disposiciones ministeriales lesivas de los derechos de la Iglesia.

Están expuestas con tanta concisión, que su simple reproducción será la mejor confirmación de esta aseveración:

Creo que no ha ponderado debidamente V. E. sus propias palabras, al calificar con el nombre «de pequeño problema» la supresión de las Ordenes militares, y al afirmar que las Ordenes militares «no tienen la más remota conexión actual con la espiritualidad religiosa».

O V. E. no recordaba en el momento en que escribió estas palabras el art. 9 del Concordato vigente de 16 de marzo de 1851, o, en caso contrario, antepono su criterio personal al juicio del santo, del sabio y del inmortal Pontífice, quien consigna esta razón histórica poderosísima para conservar perpetuo recuerdo de nuestras meritisímas Ordenes militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa: «debiendo, por otra parte, conservarse cuidadosamente los recuerdos de una institución, que tantos servicios ha hecho a la Iglesia y al Estado».

No había de mediar ninguna otra razón para conservar las Ordenes militares en España, y ella sería más que suficiente, aunque exigiera su conservación algún sacrificio por parte de la nación. ¡Verdaderamente son dignos de lástima los pueblos que no saben estimar las grandezas de sus mayores, y destruyen inconscientemente sus más preciados recuerdos de familia!

Por lo demás, creo convendrá V. E. con los que opinan que el juzgar si las Ordenes militares tienen o no «conexión actual con la espiritualidad religiosa» es cuestión que, más que al Gobierno, corresponde juzgar a la Iglesia, a quien por derecho propio y privativo incumben las cosas de la espiritualidad religiosa, según la doctrina católica, consignada por León XIII en su Encíclica «Inmortale Dei» de 1 de noviembre de 1885 con estas palabras: «todo lo que en las

comas humanas es, por cualquier título, suprala, todo lo que conviene a la santificación de las almas y al culto divino, ya sea tal por su naturaleza, ya con relación a su fin, está exclusiva e íntegramente bajo la potestad y el arbitrio de la Iglesia».

Quisiera seguramente haya vuelto V. E. a leer su carta no duda reconocerá que su frase «se trata en la vida contemporánea de exterioridades honoríficas y debilidades aristocráticas», hubiera sido tal vez más oportuno suprimirla, como propia de un documento de esta índole.

Mas hay otro motivo que, aun prescindiendo de los anteriores, obligaba a otros procedimientos que los que se han usado para la intontada supresión de las Ordenes militares. Su existencia está garantizada expresamente por un artículo del Concordato; mas ésta es razón, sobre la que tengo necesidad de decirle unas palabras a continuación.

He de manifestar a V. E. ingenuamente que nada en su carta me produjo tan penosa impresión como aquella frase, con la que trata de justificar todas las medidas adoptadas contra los derechos de la Iglesia: «*todos ellos, dice aludiendo a los motivos de protesta del Episcopado, sea cual fuere el criterio de partido o tendencia sobre el fondo o solución, se reconocen unánimemente en el Derecho político moderno como pertenecientes a la esfera jurisdiccional del mismo*».

No quisiera herir en lo más mínimo su susceptibilidad; mas no he de ocultar a V. E. la gravedad que para el católico encierra la doctrina sentada en esta afirmación, que tantos reparos ofrece, aun considerada desde otros puntos de vista.

Si al hablar V. E. del *Derecho político moderno* se refiere, como parece, al Derecho llamado nuevo, *basado en los principios del naturalismo*, proclamando por la revolución, no debe ignorar V. E. que este Derecho político moderno está *positiva y terminantemente condenado por la Iglesia* en innumerables documentos, que no debe ignorar ningún hijo de la Iglesia, tales como la Encíclica de Su Santidad Pío IX «*Quanta cura*», de 8 de diciembre de 1864, en la que se reprueba expresamente el naturalismo político. «*Conocéis, dice, Venerables Hermanos, que en estos tiempos hay muchos que aplican a la sociedad civil el ímpio y absurdo principio del Naturalismo, como ellos le llaman, y se atreven a enseñar que la perfección del Gobierno de los pueblos y el progreso civil exigen en absoluto que la sociedad humana se constituya y gobierne sin tener para nada en cuenta la Religión, como si ella no existiese, o al menos sin hacer distinción alguna entre la religión verdadera y las falsas*».

El sistema del naturalismo político ha sido definitivamente proscrito a los católicos en el áureo documento pontificio del *Syllabus*, que lleva la misma fecha que la Encíclica *Quanta Cura*.

Esta condenación vuelve a reproducirse en términos gravísimos en las Encíclicas de Su Santidad León XIII, *Immortale Dei*, de 1 de noviembre de 1885, y *Libertas*, de 20 de junio de 1888, por no citar una larga serie de documentos pontificios posteriores.

Si por *Derecho político moderno* entendiera tal vez V. E. el derecho que dimana de la implantación del nuevo régimen en España, basta recordar las palabras de Su Santidad León XIII en la Encíclica *Libertas*: «De las diversas formas de Gobierno, siempre que sean aptas para procurar el bien común de los ciudadanos, la Iglesia no rechaza ninguna. Mas *exige*, y así lo pide la misma naturaleza de las cosas, que no lesionen derechos de nadie, y que en especial respeten íntegros los derechos de la Iglesia.»

Mas no hay ni puede haber verdadero *Derecho político moderno* que sienta el principio, inadmisibile por ser opuesto al mismo derecho natural: «*pacta sunt servanda*», de que no hay obligación de guardar los pactos legítimamente establecidos.

Y aquí es donde no ya los católicos, sino los hombres de leyes, y aun los hombres de Gobierno, deben reconocer que en las disposiciones que han motivado las reclamaciones interpuestas se ha traspasado el límite de lo legal.

Mientras subsista el Concordato vigente, y no consta que haya sido válida y licitamente derogado, deben quedar por el mismo hecho sin vigor todas las disposiciones ministeriales que a él se opongan.

La simple lectura de los cuatro artículos fundamentales del Concordato demuestra patentemente su incompatibilidad con los decretos y disposiciones citados.

«La Religión Católica, se dice en el art. 1.º del Concordato, Apostólica, Romana, que, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios y lo dispuesto por los sagrados Cánones.»

«En su consecuencia, dice el art. 2.º, la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma Religión Católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los Obispos y demás Prelados diocesanos, encargados por su ministerio de velar por la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres y sobre la educación religiosa de la juventud, en el ejercicio de este cargo aun en las Escuelas públicas.»

«Tampoco, se dice en el art. 3.º, se pondrá impedimento alguno a dichos Prelados ni a los demás sagrados ministros en el ejercicio de sus funciones, ni los molestará nadie bajo ningún pretexto en cuanto se refiera al cumplimiento de su cargo; antes bien, cuidarán todas las autoridades del Reino de guardarles y de que se les guarde el respeto y consideración debidos, según los divinos preceptos, y de que no se haga cosa alguna que pueda causarles desdoro o menosprecio. Su Ma-

general y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los Obispos en los casos que lo pidan; principalmente cuando hayan de oponerse a la indignidad de los hombres que intenten pervertir las almas de los fieles y corromper sus costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, *introducción o circulación* de libros malos o nocivos. •

Finalmente, el art. 4.º estableció que «en todas las demás cosas que pertenecen al derecho y ejercicio de la autoridad eclesiástica, y al ministerio de las Ordenes sagradas, los Obispos y el Clero, dependientes de ellos, gozarán de la plena libertad que establecen los sagrados Cánones. •

A la clara luz que proyecta la doctrina católica sentada en estos cuatro artículos del Concordato, ¿qué sombras se proyectan en las primeras disposiciones del nuevo régimen, relacionadas con los derechos de nuestra Santa Madre la Iglesia!

26.- Circular núm. VI del cardenal Segura y anexos.

20 de julio de 1931, *Esquela i Estat duren la segona Republica espanyola*, I, págs. 195-161.

(Personal y reservadísima)

Santa María de Belloc, 20 de julio 1931.

Mi venerado Hermano y querido amigo: Las circunstancias, que ya conoce, han retrasado algunos días esta carta circular de indole confidencialísima. Sería muy conveniente que lo mismo esta carta que los documentos que la acompañan fueran quemados, después de tomarse las notas convenientes, en forma que no pudieran comprometer.

I. FACULTADES

Cuando estuve en Roma solicité de la Santa Sede facultades extraordinarias, que con amplitud otorgo generosamente el Santo Padre, haciéndose cargo de la situación especial por que atraviesa la Iglesia española.

En la hoja número I va la copia literal de las facultades otorgadas en lo referente a bienes eclesiásticos. Ha de advertirse muy bien que la concesión está hecha con estas dos cláusulas, sustanciales ambas: 1) *perdurantibus peculiaribus hiis adiunctis rerum*, y la 2) *suh lege de omnibus relationem suo tempore ad hanc S. Congregationem transmittendi*.

Pidieronse asimismo facultades extraordinarias a la Sagrada Congregación de Religiosos: las facultades que se solicitaban van expresadas en la hoja número II. La Sagrada Congregación respondió de palabra lo que sigue: que la forma de la petición podía dar orígenes a ansiedades de conciencia en las religiosas, y que parece ampliarlas, concediendo (como se hace por mi medio en virtud de esta carta) facultades amplísimas a todos los Ordinarios, sin limitación alguna, quedando solo la obligación de informar a la S. Congregación de Religiosos sobre lo que hayan hecho los Prelados, cuando pasen las actuales circunstancias. No tengo necesidad de agregar que la acogida del Santo Padre fue extraordinariamente paternal, comboliéndose sumamente de [la] situación de la Iglesia española, y queriéndole ayudar todo cuanto fuera posible.

Si además de estas facultades cree algún Prelado conveniente pedir otras pertenecientes a otros órdenes de cosas con carácter general, no tiene más que indicármelo, pues yo ahora desde aquí tengo grandes facilidades para comunicarme rápida y seguramente con la Santa Sede.

II. INFORMES SOBRE SEGURIDAD DE LOS BIENES DE LA IGLESIA EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS

Se mandan en la hoja número III y demás numeradas con números arábigos. Son dos informes de los cuales el primero está dado por el Letrado Asesor, y el segundo resume el parecer de las personas más técnicas en la materia. No hay que decir la trascendencia que tiene el que estos informes puedan venir a caer alguna vez en manos extrañas; llegaría a producir funestísimos efectos. Urge, por lo tanto, el que de un modo especial estos informes se inutilicen inmediatamente, ya que en el caso de una inspección pudieran servir de orientación a los enemigos para medidas persecutorias de la propiedad de la Iglesia.

III. COMUNICACIÓN ENTRE EL EPISCOPADO

Conviene, hasta tanto que se normalicen las cosas y haya ciertas garantías de seguridad, de que hoy carecemos, rodear de toda clase de cautela las comunicaciones. Por lo que a mí toca, hasta nueva orden, que sería comunicada a cada Prelado, puede escribirse a Toledo en doble sobre, el exterior dirigido al Sr. Provisor del Arzobispado, y el interior a mi nombre; los que prefieran escribirme a Bayona pueden hacerlo en doble sobre igualmente, el exterior dirigido al Excmo. Sr. Obispo de Bayona, y el interior a mi nombre.

Las cartas circulares que hayan de dirigirse al Episcopado sobre asuntos delicados, en adelante, mientras no se llegue a una normalidad más estable, irán a mano las cartas de cada Provincia Eclesiástica a los respectivos Rvdmos. Metropolitanos, cuidándose ellos de mandarlas por el mismo procedimiento a sus Sufragáneos, o de avisar a estos, para que manden recoger los documentos a la Sede Metropolitana. Siendo los documentos de la índole de los que contiene la adjunta carta, no deben en modo alguno confiarse al correo aun bajo certificado. En las Sagradas Congregaciones insistieron muchísimo sobre este punto.

IV. NUEVA REUNIÓN DE METROPOLITANOS

Se habló en Roma de la conveniencia de una reunión de Rvdmos. Metropolitanos, después que se viera de un modo más firme el sesgo que tomaban las cosas de España, cuando estuviese ya vencida la labor de las Cortes Constituyentes, para poder tratar entonces de las normas que fuera necesario establecer para una acción común.

Como se calcula que esto pudiera llegar a realizarse para el mes de Octubre, sería conveniente que cada uno de los Hermanos fuera pensando los temas que a su juicio puedan tratarse, enviándolos sin firma a Toledo en doble sobre, según antes queda indicado.

Si para entonces no hubiese podido yo regresar, presidiría la conferencia el Sr. Cardenal o Arzobispo más antiguo, a no ser que otra cosa determinase la Santa Sede.

V. DOCUMENTO COLECTIVO

Alguien ha indicado la conveniencia de dirigir un documento colectivo del Episcopado a las Cortes Constituyentes, reclamando se respeten los derechos de la Iglesia violados por recientes disposiciones ministeriales.

Convendría saber cuál es el criterio de todos los Hermanos con relativa prontitud para poder proceder en su consecuencia, pues ahora todo se *dificulta en extremo, y el tiempo pasa rápidamente.*

Del mismo modo convendría que agregase cada Hermano en su carta, si cree conveniente se dirija algún documento colectivo del Episcopado a los fieles, y que puntos haya el de abarcar, y en qué forma sea procedente publicarlo.

VI. ORIENTACIONES AL EPISCOPADO

Varias veces se me repitió en Roma que de momento no había necesidad de nuevas orientaciones al Episcopado español; y sin embargo algunos Hermanos han hecho llegar hasta mí el deseo de que se den.

Sería, pues, tal vez oportuno que al mismo tiempo que se responde a los puntos, que anteriormente se locan, se indicasen los extremos sobre los que se juzga conveniente recibir orientaciones, para en caso necesario pedirías o consultarlas.

Quedan otros puntos menos urgentes, que aplazo para otra carta, para no haver esta demasiado voluminosa.

Le agradezco cordialmente su fraternal caridad para conmigo, y le pido ruegue y haga rogar por mí, pues no desconoce los graves trastornos que se siguen de mi ausencia en orden a cosas que a todos interesan.

Con todo afecto le envía un fraternal abrazo su adictísimo servidor.
Hermano y amigo q. b. s. m.

† El Cardenal Arzobispo.

[ANEXOS]

HOJA 4.ª I.

Subsequentes expostulatae sunt facultates pro omnibus Hispaniae Episcopis:

1.ª constituendi de fundo acervorum piorum capellanias usque ad quantum 2000 pesetas, quibus possit provideri aliquo sustentationi cleri;

2.ª vendendi de consensu Consilii Administrationis et de consilio Capituli Cathedralis quaelibet bona ecclesiastica cuiuscumque valoris;

3.ª dispensandi a conditionibus statutis in foundationibus ecclesiasticis quae adstringunt ad adimplenda onera determinato tempore vel loco vel a determinata persona, ita ut haec onera adimpleri possint quocumque loco intra dioecesim vel, si necessarium fuerit, extra dioecesim;

4.ª collocandi in loco tuto sive intra sive extra Hispaniam, inspectis adiunctis unuscuiusque dioecesis, bona quae consistunt in titulis Debiti Publici;

5.ª erogandi, in casu quo dotatio Status supprimatur, pecunias quae supersunt sive ex acervis liberae dispositionis, sive ex ipsis foundationibus post adimplendum onerum, sive quae pertinent ad fundum dictum *de reserva* pro sustentatione sacerdotum per semestre post statutam suspensionem dotationis, et dum stabili modo fiat organizatio oeconomica dioecesis.

HOJA 4.ª II.

1. — Facultas permittendi Religiosis omnibus ut vivant in domibus privatis plene totis religiose, durantibus hiis adiunctis.

2. — Facultas commutandi omnibus religiosis chori obligationem recitandi Officii divini in recitatione rosarii marialis.

3. — Facultas alienandi de consensu Capituli monasterii, per scriptum obtento, et de consensu consilii administrationis dioeceseos, quaelibet bona movilia vel amovilia ad ipsas pertinentia, et asservandi titulos Debiti Publici in futuro sive intra sive extra Hispaniam.

4. — Facultas ut non censeatur interruptum tempus postulatus vel novitiatus vel votorum simplicium per discessum hunc violentum a propriis domibus.

5. — Facultas remanendi, quoad abstinentiam et ieiunium, omnes subjectae tantum legibus communibus Ecclesiae datis pro fidelibus.

6. Facultas lucrandi indulgentias et privilegia suis Ordinibus concessas.

7. — Quoad vota paupertatis et obedientiae, ubi non possit fieri recursus ad superiorissimam, observantur prout fieri possit, datis circumstantiis.

8. — Facultas omnibus confessoribus concedatur dispensandi illas regulas et constitutiones, quae, data conditione personae, non possunt impleri in hiis adiunctis.

HOJA III.

Consulta

Se pregunta:

1.ª Modo de sacar a salvo en las circunstancias actuales los valores pertenecientes a la Iglesia y a las instituciones eclesiásticas.

2.ª Modo de librar de peligro en estas circunstancias los bienes inmuebles propios de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas.

3.ª Modo de poner las cuentas corrientes de la Iglesia e instituciones eclesiásticas fuera del alcance de todo peligro.

4.ªCuál será el empleo más seguro del capital en las circunstancias actuales o presentes.

DOCUMENTO

I

Para sacar a salvo los valores propios de la Iglesia e instituciones eclesiásticas, hay que distinguir si consisten en inscripciones nominativas o en títulos al portador.

En el primer caso no veo medio; porque, estando los valores inscritos como tales bienes eclesiásticos, no hay manera de ocultar o simular su verdadero carácter, y en todo momento de un modo auténtico todo lo concerniente a dichos valores.

Por el contrario, si se trata de títulos al portador, cabe ponerlos a salvo, con sólo hacer que los títulos en sí mismos estén siempre en lugar seguro, a donde no pueda alcanzar la acción de quien intente arrebatarlos. Para ello no deberán ser depositados en ningún Banco, ni establecimiento alguno público, sino que es preciso conservar los títulos mismos en poder de las personas eclesiásticas o de otras que les merezcan confianza. De igual modo conviene que el cobro de los cupones vaya haciéndose cada vez de distinto modo y por persona diferente, porque muchas veces en la manera constante de hacer ese cobro por persona a todas luces eclesiástica, queda huella indubitable de quién es su dueño.

La propiedad legítima de los títulos al portador se transmite por la simple entrega de los mismos, sin necesidad de ninguna clase de formalidades.

A mayor abundamiento, los cupones son por sí mismos también títulos al portador; por lo tanto puede cobrarlos cualquiera. Y por regla general hasta los cupones de los títulos nominativos, una vez recortados de éstos, se convierten en verdaderos documentos al portador.

Para la custodia de los títulos al portador, como para guardar el dinero, basta con que aquellos mismos estén en sitio donde no puedan ser materialmente arrebatados.

II

La defensa de los bienes eclesiásticos es en cierto modo semejante a la de los valores.

Cuando se trate de bienes que por sí mismos o por su título jurídico sean manifestamente eclesiásticos, no hay modo legal de ocultar su verdadera naturaleza, ni de librarlos de los menoscabos que por ella misma sufran. Así los templos, los cementerios y los palacios episcopales, aunque no estén inscritos en el Registro de la Propiedad como tales, siempre aparecerán a los ojos de todos como cosas eclesiásticas. Las casas rectorales que estén inscritas con ese carácter, conservarán su condición de bienes eclesiásticos, mientras no sean enajenadas a un particular.

En cuanto a los demás bienes inmuebles propios de la Iglesia o de las instituciones eclesiásticas según sus títulos jurídicos, habrá necesidad de enajenarlos a persona de nacionalidad española o extranjera, que no tenga una relación visible con la Iglesia y que ante un atropello pueda reivindicarlos, como cualquier seglar revestido de la plenitud de derechos.

La experiencia enseña que, en casos de revolución, ninguna propiedad es tan respetada como la de los extranjeros puestos bajo el amparo de sus respectivos Estados.

La práctica de hipotecar los bienes eclesiásticos, aparte de haberse extendido con exceso, no constituye una garantía completa; porque, llegado el caso de una expropiación, el crédito hipotecario sufrirá los vaivenes propios de los bienes hipotecados y los quebrantos consiguientes a la dificultad de ser vendidos, para hacer efectivo el crédito.

Claro está que no nos referimos aquí a las cantidades ya cobradas al tiempo de constituirse la hipoteca, porque ellas sí que son dinero efectivo puesto a salvo de todas las incertidumbres. Tales son, por ejemplo, las hipotecas convenidas con el Banco Hipotecario.

Algunas veces se han constituido compañías o sociedades por acciones que, teniendo verdadera personalidad jurídica para ser dueñas legítimas de los bienes, han permitido convertir el derecho real de dominio sobre ellos en acciones o títulos de crédito que en un momento dado pueden ser vendidos incluso a extranjeros. Esta es una fórmula perfectamente legal y recomendable, que sólo ofrece el inconveniente de ser costosa y exigir el pago de algunos tributos.

Hay en el extranjero algunos Bancos que reciben líneas de particulares, y valdría la pena de estudiar de cerca esta combinación jurídica, así como las modalidades constituidas al efecto en Francia. En nuestra práctica profesional hemos tenido ocasión de tratar con un Banco inglés digno de estudio. En otra ocasión recibimos noticia de una institución suiza.

En todo caso es inaplazable la formación en todas las diócesis de registros minuciosos de todos los bienes eclesiásticos, con su detallada descripción jurídica para tener inventarios completos que en su día permitieran seguir el curso de los bienes y reclamar las reivindicaciones procedentes.

Con ser tan graves los daños producidos a la Iglesia por la desamortización eclesiástica en sí misma, aun han sido mucho mayores los causados por el abandono de nuestros derechos, que nos ha impedido recuperar gran parte de lo que aun concedían las leyes, y todavía esta porción ha habido que cederla, dejando proporciones enormes entre las manos de agentes y vividores.

La actitud expectante y pasiva suele ser la más dañosa en el orden legal, y en ocasiones conviene anticiparse a practicar por sí mismos las ventas que la ley ordena. Si no tenemos mal entendido, es la catedral de Lérida todavía la más rica de las españolas por haberse adelantado a hacer por sí misma la desamortización que las leyes le impusieron.

III

Bien se comprende que toda cuenta corriente abierta a nombre de personas eclesiásticas está expuesta a innumerables riesgos, porque la inspección ejercida sobre todos los Bancos nacionales y extranjeros, sin excepción alguna, que dentro del territorio español funcionan, convierte en registros públicos las listas de los cuentacorrentistas.

Para mantener el secreto a que toda persona tiene derecho sobre su fortuna, no hay más remedio que acudir al tesoreramiento, o utilizar establecimientos de depósito situados fuera.

IV

La colocación del capital eclesiástico plantea casi los mismos problemas que el empleo de cualquier clase de ahorros.

Siempre será más movable, y por lo tanto más fácil de defender, el dinero empleado en valores, que en bienes inmuebles. De los valores habrá que preferir, conforme al espíritu canónico, los de renta fija, como son la deuda del Estado, y las obligaciones, a las acciones que producen ganancias variables.

Los dos riesgos que ofrecen la Deuda Pública y las obligaciones de empresas privadas son: la posibilidad de que algún día quede en suspenso el pago de los intereses, como ocurrió durante la Revolución de Septiembre; y la depreciación muy temible de la moneda española, si aquí se producen grandes trastornos.

Estará mejor defendida contra esos riesgos quien logre colocar sus ahorros en títulos que ofrezcan la seguridad de pagar puntualmente las rentas, y que se coticen en moneda equivalente al oro; condiciones ambas que concurren en los títulos de la Deuda Pública de algunos países, como Francia u Inglaterra por ejemplo.

Pero justo es reconocer que será difícil llegar a la insolvencia del Estado español, porque ello implicaría ya un estado tan anárquico que haría temer una intervención extranjera.

Madrid, 11 de Mayo de 1931.

R. MARÍN LÁZARO. (Es copia).

27.- Decretos sobre el Tesoro artístico nacional y sobre conservación de obras artísticas.

22 y 27 de mayo de 1931.

Gaceta de Madrid, 26 de mayo de 1931, núm. 146, págs. 949-950.

Gaceta de Madrid, 28 de mayo de 1931, núm. 148, pág. 976.

Decreto de 22 de mayo de 1931.

La defensa del Patrimonio artístico español exige medidas urgentes y eficaces que eviten su pérdida, su deterioro y su malversación. Disposiciones bien intencionadas, como el Decreto de Gracia y Justicia de 9 de Enero de 1923 y el de la Presidencia del Consejo de 2 de Julio de 1930, apenas han dado el menor fruto porque los obligados a obedecerla buscaron subterfugios para burlarlas y porque faltó al Poder público energía para castigar las transgresiones. Es inexcusable, por tanto, que este Gobierno haga cumplir con decisión inflexible los preceptos que dicte en materia que tanto importa a España, pues el Patrimonio artístico y cultural de un pueblo constituye su tesoro más preciado.

Ha de ser base de cuanto se legisle acerca de esto el pleno derecho de los españoles al disfrute de las obras de arte y de cultura legadas por el pasado: derecho que se funda no sólo en el origen e historia de inmuebles y objetos, sino en que su guarda y conservación ha sido y es carga de España y que su valor actual se ha formado por el aplauso y la admiración de todos y su aprecio se debe a estudios de críticos y eruditos, casi siempre a sueldo del Estado, sin dispensando ni auxilio de los poseedores y, hasta muchas veces, con su oposición tenaz. De aquí que evitar la destrucción, intencionada o por abandono, de monumentos y objetos artísticos, e impedir su salida de España, es un deber que a todos alcanza y al Gobierno muy especialmente obliga.

Por otra parte, y para coadyuvar al mismo fin, ha de procurarse que las obras de arte ocultas y poco conocidas se manifiesten y publiquen como el mejor medio de vigilarlas; y ha de favorecerse, en cuanto sea posible, la corriente que en todo el mundo menos en España encamina a los Museos las riquezas artísticas de entidades y particulares.

Podría el Gobierno imponer, desde luego, el principio firme de la inenajenabilidad por las entidades eclesiásticas de los objetos de arte de que son depositarios; pero, extremando la prudencia, se limita en este Decreto a establecer normas prácticas reguladoras de las enajenaciones de obras de arte por las entidades y personas jurídicas civiles y eclesiásticas, recogiendo el sentir de disposiciones de Gobiernos anteriores, acatadas, aunque incumplidas casi en absoluto.

Ordenó el referido Decreto de 1923 la exigencia de un permiso especial del Ministerio de Gracia y Justicia para tramitar cualquier venta por las entidades de carácter religioso, y el de 1930 dispuso que toda venta había de ser anunciada previa y profusamente y efectuada con cierta solemnidad. En cumplimiento del primer Decreto se incoaron treinta expedientes en más de ocho años y se desconoce todavía un caso de obediencia al segundo. Parecía, sin embargo, que con ambas disposiciones quedaban a salvo, no sólo gran parte de los intereses culturales de la Nación, sino también los económicos de los vendedores, víctimas de frecuentes engaños, por ignorar el valor de lo que con ligereza enajenaban.

La pertinaz y mal entendida desobediencia a las decisiones del Poder público obliga a renovar los preceptos sobre ventas de objetos artísticos, robusteciéndolos, para hacerlos cumplir sin lenidad.

Si al aprovechamiento de lo que se juzga utilizable entre lo legislado se añade lo que la experiencia aconseja, y si se procura un mejor ajuste entre los órganos provinciales y locales del Poder público, se obtendrá lo que hasta ahora no se ha podido lograr y es imprescindible conseguir en tanto que nuevas leyes resuelven el problema por completo y a fondo.

En consecuencia, como Presidente del Gobierno provisional de la República, de acuerdo con éste y a propuesta del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Las entidades y personas jurídicas, así eclesiásticas como civiles, no podrán enajenar inmuebles ni objetos artísticos, arqueológicos o históricos de una antigüedad que, entre los peritos en la materia, se considere mayor de cien años, cualesquiera que sean su especie y su valor, sin previo permiso del Ministerio de que depende y mediante escritura pública.

Artículo 2.º Toda entidad o persona jurídica o eclesiástica o civil que quiera enajenar un inmueble u un objeto artístico, arqueológico o histórico, lo pondrá en conocimiento del Gobernador civil de la provincia. Acompañará a la comunicación dos o más fotografías del inmueble u objeto, su descripción minuciosa, con las dimensiones, peso, si el objeto fuese de metal precioso; noticias de su origen, historia; títulos de posesión e indicación precisa de donde se encuentre el inmueble u objeto; además del precio en que está convenida la enajenación.

Artículo 3.º El Gobernador, al recibir la comunicación a que se refiere el artículo 2.º, dará urgente conocimiento de ella al Delegado de Bellas Artes y a la Comisión de monumentos requiriendo informes precisos, que se publicarán en el *Boletín Oficial* y en la Prensa local y provincial.

Obtenidos los informes y con los esclarecimientos que juzgue oportunos remitirá el expediente al Ministerio que corresponda.

Artículo 4.º Ningún Ministerio podrá resolver un expediente de enajenación de inmuebles u objetos artísticos, arqueológicos o históricos sin el informe de la Dirección general de Bellas Artes, que, para su emisión, podrá servirse de las Académias, de la Junta Nacional de Archivos, Estadísticas y Museos, de la Junta Superior de Encargados o de otra corporación consultiva, y cuando lo estime conveniente, de cierta personalidad relevante en el cultivo de las ciencias histórico-artísticas.

Artículo 5.º No se considerará permiso para enajenar ningún inmueble u objeto que haya sido declarado en Estado por las leyes de amortización, aunque en la actualidad esté al cuidado de las Autoridades eclesiásticas.

Artículo 6.º Queda también prohibida la enajenación de objetos custodiados por Reges españoles o extranjeros o custodiados por los pueblos, al menos que el comprador sea un Museo, un Archivo o una Biblioteca española, nacional, provinciales o locales.

Artículo 7.º El Gobernador civil de la provincia donde radique el inmueble o donde esté el objeto que se trata de enajenar, adoptará por sí mismo las medidas necesarias para su debida custodia, pudiendo incoarse de él sin intervención de autoridades de otro orden. Si es un inmueble, depositará la más estrecha vigilancia, y si es un objeto fácilmente transportable, lo hará depositar en el Museo más próximo o en un Centro cultural adecuado. Si se trata de un objeto de difícil o peligroso traslado, depositará la debida guarda; y, en todos los casos, podrá autorizar que lo que se intenta enajenar pueda ser visto y estudiado por quien lo desee en un plazo no menor de quince días.

Artículo 8.º Los contratos de venta y enajenación de bienes inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos o históricos, que se celebren por las entidades o personas jurídicas, excepto los que se celebren por Corporaciones mercantiles, no podrán ser válidos si no son públicos. La nulidad de los mismos y las sanciones se declararán por la Administración, reclamando contra sus determinaciones ante los Tribunales de lo Contencioso-administrativo.

Artículo 9.º Para que los contratos de enajenación de inmuebles u objetos a que se refiere este Decreto sean válidos, deberán extenderse en documentos públicos, ante Notario que negará su intervención si no se le exhibe la autorización del Ministerio correspondiente para la enajenación que transcribirá en el documento, así como extractarla en el mismo la titulación y el expediente incoado en esta cosa.

Artículo 10.º Cuando la enajenación se celebre y autorice para atender con un importe a la reparación o mejora de los edificios de las personas que piden ayuda, podrá la entidad compradora a que se refiere el artículo 11 del presente Decreto pagar el precio, reduciendo las obras de mejoras proyectadas, que se computarán en el total importe de aquél en la proporción e cantidad que se estipule por los contratistas.

Artículo 11. En los contratos no habrá enajenación por donación ni por otra manera de liberalidad, ni por la remuneratoria; los contratos por enajenación futura de venta serán nulos. Se exceptuarán los casos en que el enajenador sea un Museo, un Archivo o una Biblioteca de España.

No serán válidos los contratos de permuta ni los mixtos de venta y permuta.

No tendrán validez los contratos de arrendamiento ni cesión temporal de alguna especie. Se exceptúa el de arrendamiento para una Exposición, el temporal en un Museo, Biblioteca o Archivo nacionales o el accidental, para caso de riesgo, en lugar que ofrezca seguridad.

Artículo 12. La tramitación del permiso para enajenar un inmueble o un objeto artístico, arqueológico o histórico, en favor de un Museo, un Archivo o una Biblioteca de España, nacional, regional, provincial o local, se someterá a la comunicación para y con el Gobernador civil, haciendo constar el precio estipulado. La comunicación habrá de ir firmada y sellada por los representantes de las entidades o personas jurídicas vendedoras y compradoras. El Gobernador remitirá un traslado de la comunicación al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Artículo 13. El Estado podrá ejercer el derecho de tanteo en todo expediente de enajenación y podrá delegarlo en un Museo, Archivo o Biblioteca de España, por este orden de preferencia; de la localidad donde esté ubicada el inmueble u objeto, de la capital de la provincia, de la capital de la región, de cualquier población de la región, de la capital del Estado, de las provincias y pueblos restantes.

Artículo 14. La declaración administrativa de nulidad de las enajenaciones a que se refiere este Decreto producirá el comiso del objeto de las mismas, que quedará a disposición del Gobierno, con obligación de incorporarlo a los Museos, Bibliotecas o Archivos públicos por el orden de pre-

ferencia del artículo 13, a las medidas de seguridad. El Gobernador adoptará las medidas precautorias del artículo 15, desde el momento que se puede haberse realizado, o que se intenta una enajenación válida.

Cuando el objeto de la enajenación no pueda ser habido, los contratantes y sus Agentes e intermediarios serán objeto de una multa de tanto al duplo del precio de la venta, de la que serán todos ellos solidariamente responsables.

Artículo 15. Cuando por la desaparición de un objeto de su sitio habitual o por otra causa cualquiera pueda presumirse que se intenta una enajenación, el Gobernador podrá comprobar la subsistencia del mismo por inspección directa o delegada de los inmuebles o lugares en que pudiera encontrarse, impetrando para realizarlo la oportuna autorización judicial en los casos necesarios, adoptando, si fuese preciso, las medidas precautorias del artículo 7.º

Artículo 16. Cuando por decisión judicial o administrativa se enajenen bienes de los comprendidos en este Decreto, el Estado podrá ejercitar el derecho de tanteo que el artículo 13 le concede para los casos de enajenación voluntaria dentro del plazo de veinte días, a contar desde la publicación del mismo en pública subasta.

Artículo 17. Las personas naturales y las Compañías mercantiles dedicadas al comercio de antigüedades quedarán exceptuadas de los preceptos anteriores, salvo en el caso en que estas personas actúen por encargo, comisión o agencia de las comprendidas en el artículo 1.º del presente Decreto.

Artículo adicional. Las disposiciones del presente Decreto no derogan ni destruyen las prohibiciones y garantías que están en vigor sobre exportación al extranjero de la riqueza artística nacional.

Dado en Madrid a veintidós de Mayo de mil novecientos treinta y uno.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TROYANO,
Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.

MARCELINO DOMINGO y SARRIENA

Decreto de 27 de mayo de 1931.

El Decreto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes de 22 de Mayo de 1931, dictado en defensa del Patrimonio Artístico Nacional, reconoce el derecho que a su disfrute tienen los españoles y la obligación de defenderlo, que compete al Gobierno de la República. Persiguen principalmente los preceptos de aquella disposición impedir que nuestras obras de arte salgan de España; complemento de la misma ha de ser otra que evite también el peligro señalado en el preámbulo del referido Decreto y que se refiere a la destrucción de dichas obras por ignorancia o abandono.

La nobleza del propósito permitiría dictar radicales medidas de incautación para salvaguarda de las joyas de arte en peligro, pero el Poder público ha de mostrarse cuidadoso en que, sin hacer dejación de sus atribuciones y deberes, los acuerdos que adopte no lastimen sentimientos muy respetables. Tales son los que a cada localidad inspiran las obras de arte que el pasado les legó, y que se consideran con legítimo derecho a conservar, no ya sólo por el goce espiritual de la contemplación de las mismas, sino por las ventajas económicas que a la localidad reporta la posesión de estas obras, motivo de atracción turística.

Ningún Gobierno digno de serlo podría desoir esta legítima aspiración del pueblo; pero mucho menos ha de hacerlo el que debe su exaltación a la voluntad del mismo, como ocurre al provisional de la República.

Es, pues, necesario dictar normas que, respetando el innegable derecho de cada localidad a conservar aquellas joyas del Tesoro Artístico que la historia le legó, permitan, sin embargo, retirarlas con carácter temporal y con toda clase de garantías para sus dueños o guardadores, cuando, de no hacerlo, pueda derivarse un peligro para la conservación; algo, en fin, de lo que, con éxito verdadero, viene practican-

do el Museo del Prado con las obras de propiedad particular, que expone durante cierto tiempo, cuando por su importancia merecen este honor.

En consecuencia, el Gobierno provisional de la República, a propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, decreta lo siguiente:

Artículo 1.º Cuando la Dirección general de Bellas Artes tenga conocimiento de que alguna obra artística se halla en peligro de destrucción o de desaparición por ignorancia o abandono, podrá disponer al efecto que la misma al Museo del Prado, o al Museo de Bellas Artes de Madrid, o a otro Museo de Bellas Artes que se encuentre en España, o al extranjero, como de los Museos de Bellas Artes.

El depósito en el Museo del Prado, o en otro Museo de Bellas Artes, se entenderá hecho con carácter temporal, y antes de salir de la localidad de donde se hallaba, el propietario deberá dar fe de su existencia en un triple original, que quedará en poder de la Dirección general de Bellas Artes, adopta esta determinación, en consecuencia del fin que se persigue, en todas las circunstancias que se presenten, en aquella medida, y en consecuencia, en todas las obras de arte que se hallen en las actas referidas, que se conservará al Jefe de la entidad donde las obras se hallen, otra, a la Autoridad del Centro en que se depositen, y la anterior se enviará a la Dirección general de Bellas Artes para que la presente a la Sección del Tesoro Artístico Nacional.

Artículo 2.º Si el propietario de las obras de arte fuera extranjero, el Gobernador civil de la provincia, o su propia consulta, podrá disponer de ella, dando un recibo, y podrá trasladarlas al lugar seguro, remitiéndolo por telegrama a la Dirección de Bellas Artes para que esta, ante las oportunas disposiciones, pueda dar cumplimiento al artículo anterior.

Artículo 3.º Las medidas encargadas de efectuar la incautación temporal será el Gobernador civil de la pro-

vincia o el Director de Seguridad en la de Madrid, los cuales podrán delegarla, procurando siempre que la urgencia del caso no lo impida, que intervenga en la misma el Delegado de Bellas Artes, como especializado en la materia. A cargo de éste, estará la descripción de los objetos en el acta y las medidas precautorias, para que no sufran deterioro en el traslado las obras de que se trate.

Dado en Madrid a veintinueve de Mayo de mil novecientos treinta y uno.

M. Presidente del Gobierno: *provisiónal de la República*

NICETO ALCALÁ ZAMORA y TORRES

M. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes

MARCOS MARÍN y SALVADÓR

28.- Cristianismo monárquico y monarquismo cristiano.

"El Sol", 29 de Mayo de 1931.

He leído que en alguna procesión u otro acto público de culto católico algunas damas dieron en gritar "¡Viva Cristo Rey!". No es de creer que quisieran decir "¡Viva el rey!", que no debe ser ya, como lo era antes del advenimiento de la República, un grito subversivo, sino, por inocente, permisible, y que lo de sacar el Cristo fuese para despistar; suponemos más bien que con ese piadoso grito trataran de manifestar su cristianismo monárquico o su monarquismo cristiano, lo que no es igual. De todos modos, el "Viva Cristo!" con rey o sin rey es algo así como aquel "¡Viva Dios!" que solía lanzar el piadosísimo general carlista Lizárraga cuando entraban en acción sus tropas. "¡Viva Dios!" que no es el "vive Dios que..." clásico y castizo, sino algo como el ya famoso "¡viva la Virgen!" Ingenuas y candorosas explosiones de un simplicísimo sentimiento religioso. Pero por si en ese grito se oculta otro sentido, bueno será que esas damas se den cuenta de la realeza evangélica del Cristo.

Cuenta el cuarto Evangelio (Juan, VI, 15) que cuando después que Jesús multiplicó los panes y los peces para los cinco mil varones que se acostaron sobre mucha hierba, éstos quisieron arrebatárle y hacerle rey, y retiróse él solo al monte. Huía de que le hicieran rey y no más que por haber multiplicado peces y panes. Peces y panes que son cosa de este mundo, mientras que el reino del Cristo no es de este mundo, como se lo dijo él mismo a Pilatos (XVIII, 36). Era Pilatos, el que lo entregó a los judíos para que lo crucificaran, el que se empeñaba en proclamarle rey. "¿Luego eres tú rey?", le preguntó, y respondió Jesús: "Tú dices que yo soy rey" (v. 37). Y fué Pilatos mismo el que le hizo proclamar rey cuando hizo poner en la cabecera de la cruz en que agonizó y murió aquel letrero trilingüe que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos, y el que al decirsele que pudiese que había sido el mismo Jesús el que se dijo rey, contestó: "Lo escrito, escrito queda." (Juan, XIX,

19-23). ¿Y qué hay en este pleito entre Jesús y Pilatos a cuenta de la realeza de aquél?

Lo que hay es que el Cristo no se sentía rey de este mundo, rey político, sino que eran las turbas hambrientas de pan y de peces las que querían hacerle rey, y él huía de esas turbas y de la política nacionalista de ellas. Por lo que le tentaban los escribas y fariseos para presentarlo como un sedicioso, un faccioso, contra el César, y es cuando dijo lo de "Dad al César lo que es del César", es decir, el tributo y con él la política. Escribas, fariseos y sacerdotes, para quienes el Cristo era un faccioso, un sedicioso, un antipatriota, que ponía en peligro la independencia de la nación judía. "Si le dejamos - decían - , todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación" (Juan, XI, 48), y luego: "Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación se pierda." (v. 50). Y por esto, por antipatriota, hicieron los sacerdotes que se le crucificara, y por lo mismo hizo poner Pilatos el letrero trilingüe, como queriendo decir: este es un sedicioso alzado contra el César. Mas él, el Cristo, jamás se proclamó rey de este mundo, rey político. Agonizó y murió bajo el rótulo de rey, y fue rey de agonía.

El Cristo rey, pues, y no de este mundo, es el Cristo desnudo, sin manto ni cetro, crucificado por antipatriota y agonizando en la cruz, el Cristo de la agonizante también piedad popular cristiana española. Y a ese Cristo desnudo y ensangrentado y acardenalado se le adivinan, casi se le transparentan tras las lívidas carnes, las entrañas todas. Allí dentro hay entrañas de hombre, estómago, hígado, bazo, pulmones corazón, las vísceras todas. Y sería un despropósito querer sacarla una cualquiera de ellas y ponerla fuera, sobrepuesta. ¿Qué sentido tendría ponerle o pintarle a un Cristo crucificado y desnudo un corazón al lado izquierdo del pecho? Revolveríase contra esa incongruencia tanto el sentimiento religioso como el estético. ¡Poner un corazón de pega sobre la carne que guarda el corazón entrañado! Un corazón así, de pega, a modo de una condecoración, sólo se explica sobre la túnica de un Cristo vestido, que acaso no es más que un maniquí. Un corazón así, de pega, desprendido de la red toda visceral de que forma parte, sólo se explica sobre una túnica que quiere acaso ser manto real, manto político. Y sobre ese corazón de pega, que no es el corazón entrañado del

cuerpo desnudo y agonizante, sobre ese corazón, un "Reinaré en España y con más veneración que en otras partes".

Y ese corazón ensento, separatista - pues se separa del resto de las entrañas corporales - y.... real es un corazón que a las veces se trueca en olla ciega o alcancía, si es que no en buzón. Pues le hay que recibe papeletas en que van escritos los nombres de los donantes que contribuyeron con mayores cantidades a la erección del monumento. Lo ocual tiene sin duda que ver con los panes y los peces, pero no con la realeza del otro mundo, sino con el tributo al César.

Si las damas de la Acción Católica que lanzan al aire esos 'vivas' inflamados de monarquismo leyeran más los evangelios - con notas o sin ellas - que las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque, podrían darse más clara cuenta de la realeza del Cristo y a la vez de su cordialidad. Y si estudiaran un poco de anatomía y fisiología, aprenderían que el corazón, el de entraña y no el de pega, es algo más que una bomba aspirante e impelente.

Miguel DE UNAMUNO

29.- Carta Pastoral del Episcopado sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a los católicos.

25 de julio de 1931, *BOE de Tarazona*, año 42, 17 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 326-344.

Los Cardenales, Patriarca, Arzobispos y Obispos de España, al Clero secular, Comunidades religiosas y fieles de sus diócesis.

Venerables Hermanos y muy amados hijos:

Dada la perturbación de los espíritus, provocada por el nuevo orden de cosas en nuestra Patria, indicadas las normas primordiales de respeto y obediencia a los Poderes constituidos, recomendadas siempre por la Iglesia para la conservación misma de la humana sociedad y fijados los deberes que en orden a la designación de candidatos para la formación de las Cortes Constituyentes incumbían a los católicos, creímos lo más procedente esperar a que con el aquietamiento de los ánimos se comenzase a sentar establemente los principios reguladores de la vida nacional.

No hubiéramos ciertamente roto Nuestro silencio, no obstante el deseo vehemente que Nos apremiaba de comunicarnos con vosotros en circunstancias tan extraordinarias y trascendentales, si la imperiosísima necesidad de procurar el bien de vuestras almas no nos hubiese obligado a hablar.

Callar por más tiempo fuera comprometer los sacratísimos intereses que se nos han confiado y de que hemos de responder ante el Supremo Juez.

No son los intereses terrenos, por muy caros que Nos sean, los que conciernen al bienestar de nuestra querida Patria; los que Nos impulsan a dirigirlos este llamamiento pastoral; son entre todos los más preciados intereses sobrenaturales de vuestras almas los que, sin pérdida de tiempo, reclaman Nuestra intervención.

Encargada una Comisión jurídica de proponer un proyecto de Constitución por la que se haya de gobernar a España en el nuevo régimen, ha termina-

do su trabajo, que ha sido presentado al estudio, a la discusión, a la decisión de las Cortes Constituyentes.

Es nuestro deber aleccionaros con libertad y claridad apostólicas sobre los puntos del referido proyecto, que dicen relación directa e inmediata con nuestra Santa Religión, siguiendo fidelísimamente la doctrina infalible de nuestra Santa Madre la Iglesia católica, que ninguno de sus hijos bajo ningún pretexto puede dejar de seguir sin padecer naufragio en sus creencias y sin arriesgar su eterna salvación.

Si el proyecto de Constitución prevaleciera tal como ha sido presentado, crearía a España una situación religiosa gravísima, que a todo trance es preciso evitar, si queremos precaver perniciosísimos males, principalmente del orden moral y religioso, aunque también trascenderían consiguientemente los perjuicios al orden social y aun al mismo orden material.

Desde el punto de vista religioso, comienza por implantarse, sin atenuantes, el más crudo laicismo del Estado, con sus diversas manifestaciones, que se concretan a través del articulado en proposiciones explícitamente condenadas por la Iglesia, y de las cuales habemos de hacer mención expresa.

Ved con qué enérgicas frases estigmatiza y condena el laicismo nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, en su Encíclica «Quas primas», de diciembre de 1925:

«Ahora bien, al disponer que todo el orbe católico rinda culto a Cristo Rey, con ello tenemos por cierto que apli-

amos el mejor y más eficaz remedio a una de las mayores necesidades de nuestros tiempos y "a la peste que infecta a la humana sociedad". Llamamos peste de nuestros tiempos "al laicismo, con todos sus errores y dañadas intenciones", crimen, como sabéis, Venerables Hermanos, que no se ha fraguado y como madurado en un solo día, sino que hace ya tiempo llevaba como en germen en su entraña la humana sociedad.

Y por si no bastaban palabras tan graves para dar a conocer al laicismo, con tanta propiedad llamado la «peste de nuestra época», nos describe sus principales características, que podréis ver reflejadas en el proyecto de Constitución de que tratamos.

«Se comenzó, dice, por negar la soberanía de Cristo sobre todas las naciones; se negó a la Iglesia el derecho (consecuencia del derecho mismo de Cristo) de enseñar al género humano, de dar leyes, de gobernar los pueblos con la mira de su bienaventuranza eterna. Después, poco a poco, se asimiló la Religión de Cristo a las falsas religiones y sin la menor vergüenza se la colocó en el mismo nivel. Se la sometió en seguida a la autoridad civil, y se la entregó, por decirlo así, al placer de los príncipes y de los gobernantes. Algunos llegaron hasta querer sustituir la religión divina por una religión natural o un simple sentimiento de religiosidad. También se encuentran Estados que creyeron poder prescindir de Dios, y hacer consistir su religión en la irreligión y el olvido consciente y voluntario de Dios...»

Con cuánta razón afirma el Santo Padre que este crimen social gravísimo, que esta peste mortuaria no ha madurado en un día, sino que, oculta tiempo hace en las entrañas de las sociedades, ha llegado a brotar en nuestros días, dejando en pos de sí frutos de maldición.

También desgraciadamente había venido la impiedad, inoculando en España gérmenes de esta peste del laicismo.

Cuántos de los frutos que enumera el Santo Padre se han cosechado ya en nuestro suelo patrio...

«Frutos de esta apostasía son, prosigue el Sumo Pontífice (l. c.), los gérmenes de odio sembrados en todas las partes; las envidias y las rivalidades

entre los pueblos, que mantienen las querellas internacionales y retardan todavía actualmente la venida de una paz de reconciliación; las ambiciones desenfrenadas que se cubren bien a menudo con la máscara del interés público y del amor de la patria, con sus tristes consecuencias; las discordias civiles, sin otra mira y sin otra intención que las ventajas personales y el provecho privado. Frutos todavía de esta apostasía: la paz familiar descompuesta por olvido de los deberes y el descuido de la conciencia; la unión y la estabilidad de las familias vacilantes; en una palabra, toda la sociedad perturbada y amenazada de ruina.»

No jugamos, Venerables Hermanos y amados Hijos, necesaria en los breves límites de esta Carta, la extensa refutación de cada uno de los errores doctrinales que dimanar del laicismo, y que o se expresan o se insinúan en el proyecto de Constitución. Bastará daros a conocer su existencia y su condenación.

El origen del Poder, Art. 1.º

Partese del principio, tantas veces por la Iglesia reprobado, del origen de la autoridad que se afirma emanar exclusivamente del pueblo.

Postulado es éste del ateísmo social, encarnado en las democracias sin Dios en nuestros días, y principio funestísimo, del que se derivan secuelas terribles en el régimen de los pueblos. No es extraño que tantas veces lo haya condenado la Iglesia, reproduciendo las enseñanzas evangélicas, tan conocidas de los fieles todos.

«No hay potestad, dice el apóstol en su carta a los romanos (XII, 1), que no provenga de Dios, y Dios es el que ha establecido las que hay en el mundo. Por lo cual, quien desobedece a las potestades, a Dios desobedece.»

Doctrina que desarrolla el Sumo Pontífice Leon XIII en su encíclica «Inmortale Dei», de 1 de noviembre de 1885, con estas palabras: «Y como no pueda subsistir ninguna sociedad sin que haya uno que a todos presida, moviendo a cada uno al bien común con impulso eficaz y acomodado a su propia naturaleza, se sigue que para regir una sociedad civil humana es necesaria la autoridad, la cual, así como la sociedad misma, debe tener su origen en la misma naturaleza y, por tanto, reconocer por autor suyo al mismo Dios. Porque solo Dios es el supremo y verdadero Señor de todas las cosas,

al cual, por fuerza, ha de someterse y servir todo cuanto existe, de forma que cuantos tienen derecho a mandar, su poder no le reviven de ningún otro más que de Dios, supremo universal Rey y Señor de todo lo creado».

Educa nuestro santísimo Padre el Papa Pío XI en su encíclica «Ubi arcano» de 1922, algunas de las consecuencias más terribles del principio democrático del poder con estas palabras:

«Ahora bien, eliminado Dios y Jesucristo de las leyes de la sociedad, toda vez que no es en Dios sino en los hombres el origen de la autoridad, no podía menos de suceder que, además de quitarse a las leyes su verdadera y eficaz sanción y destruirse los supremos principios de la justicia, que aun los filósofos gentiles como Cicerón, entendían que tan solo de la ley eterna de Dios podían derivarse; se socavaban también los mismos cimientos sobre los que descansa la autoridad, desechando el motivo principal por el que a unos les asiste el derecho de mandar y les incumbe a otros la obligación de obedecer. De ahí que la humana sociedad, destituida de todo sólido fundamento y apoyo, hubo por fuerza de sufrir terribles conmociones, atentos los diversos partidos que se disputaban el poder, no a los intereses de la patria, sino a su propio provecho.»

El Estado sin religión. Art. 8

De este primer principio importante que atribuye al pueblo soberano algo que de solo Dios es propio, no es extraño se deduzca la confusión del Estado ateo, proclamando que no existe religión del Estado y tratando de despojar a la Iglesia de sus divinas prerrogativas al considerarla como una de tantas Corporaciones de derecho público, y equiparándola a las falsas religiones.

Después de veinte siglos, en los que nuestro Divino Redentor ha pasado por las sociedades humanas como por la tierra de Israel (Actos x, 39), «haciendo el bien», después de haberla sacado de la barbarie y de la ruina moral, social y aun política, en que aun las mas privilegiadas se hallaban sumergidas, después de haberles dado por medio de la Iglesia una civilización perfecta que las hizo grandes y envidiables; se ha vuelto a repetir la triste y degradante escena del Pretorio: y los pueblos de hoy, deudores de Nuestro Señor por tantos títulos, han vuelto a repetir inconscientes y seducidos por los actuales enemigos de Jesucristo las mismas palabras, que hace cerca de dos mil años pronunció el pueblo judío (Juan XIX, 15) «Quitate de en medio, no tenemos otro rey que al César». O como más explícitamente se dice en la parábola (Luc. XIX, 1) «Nolumus hunc regnare super nos», «no queremos que reine sobre nosotros».

No pueden medir los pueblos la gravedad de los males, que se acarrean, con esta exclusión total de Jesucristo al proscribir su reinado social en sus códigos fundamentales.

«La inundación de todos los males —decía S. S. Pío XI— (encíclica «Quas primas») ha venido sobre el mundo porque la mayor parte de los hombres han apartado de la vida de la familia y de la vida social a Jesucristo y a su Santísima ley; pudiendo tenerse la certeza de que nunca volverá a resplandecer la esperanza cierta de la paz sobre los pueblos mientras cada

uno de los hombres y las sociedades como tales aporten de sí y rechacen al Imperio de Nuestro Salvador».

«Que responsabilidad tan terrible la de los supremos gobernantes y legisladores de los pueblos que, al suprimir la religión del Estado, ciegan criminalmente la fuente de la dicha y de la prosperidad verdadera de los pueblos!»

«Los gobernantes de las naciones no rehusen prestar por sí mismos y por el pueblo el homenaje de reverencia y de obediencia debida al Imperio de Jesucristo, si es que quieren conservar incólume su propia autoridad y labrar la dicha y la prosperidad de la patria.»

El ateísmo del Estado, tal como se proclama en el proyecto de Constitución, está explícitamente condenado en la encíclica de S. S. Pío IX, «*Quanta cura*» de 8 de diciembre de 1864, en la que se repueba la doctrina que establece «que el mejor orden de la sociedad pública y el progreso civil exigen absolutamente que la sociedad humana se constituya y gobierne sin hacer alguna diferencia entre la Religión verdadera y las falsas».

No puede, pues, admitirse por los católicos desde ningún punto de vista esta perversa doctrina que combate S. S. León XIII (encíclica «*Immortale Dei*») con estas palabras: «No pueden las sociedades políticas obrar en conciencia como si Dios no existiese, ni volver la espalda a la Religión como si les fuese extraña, ni mirarla con esquivos ni desdén como inútil y embarazosa, ni, en fin, otorgar indiferentemente carta de vecindad a los varios cultos; antes bien, tiene el Estado político obligación de admitir enteramente y abiertamente profesar aquella ley y práctica del culto divino que el mismo Dios ha manifestado que le es grata. Honren, pues, como a sagrado los príncipes el Santo nombre de Dios, y entre sus primeros y más gratos deberes cuenten el de favorecer con benevolencia

y amparar con eficacia a la religión, poniéndola bajo el resguardo y vigilante autoridad de la ley, ni den paso ni abran la puerta a institución o decreto que ceda en su detrimento».

La separación de la Iglesia y el Estado

Estas solas indicaciones son suficientes. Venerables Hermanos y amados Hijos, para que forméis criterio seguro y exacto de la cuestión hoy tan tranda y llevada en escritos y discursos de la separación de la Iglesia y el Estado.

A un desconocimiento de la doctrina católica, o a una perversión de la voluntad peligrosísima en quienes aun se precian de pertenecer al gremio de la Santa Sede, se debe el que con tanta ignorancia como malicia se proclame por muchos, no sólo como lícita, sino aun como conveniente, la antedicha separación.

Del régimen de separación de la Iglesia y el Estado formuló nuestro santísimo Padre Pío XI en su alocución «*Iam annus*», de 14 de diciembre de 1925, la siguiente afirmación categórica, que sintetiza admirablemente el sentir de la Iglesia: «A la luz de la fe católica este régimen es tan disconforme a la doctrina de la Iglesia como a la naturaleza de la misma sociedad civil».

Bastará citar sencillamente algunos documentos pontificios interesantísimos y sobradamente conocidos, sin comentario alguno.

S. S. Gregorio XVI, en su encíclica «*Mirari vos*», de 15 de agosto de 1832, decía: «No podemos esperar para la Iglesia y el Estado mejores resultados de las tendencias de aquellos que pretenden separar la Iglesia y el Estado, y romper la concordia mutua entre el sacerdote y el imperio. Es ya notorio el temor con que miran los favorecedores de la libertad más desenfundada esta concordia, siempre tan provechosa a los intereses religiosos y civiles».

El Soberano Pontífice Pío IX condena en el «Syllabus» la proposición 55: «La Iglesia debe separarse del Estado y el Estado de la Iglesia», y la proposición 77, que enseñaba «que en nuestra edad no conviene que la religión católica sea tenida como la única religión del Estado con exclusión de otros cualesquiera cultos».

Luminosísimos son los testimonios que a este propósito pudieran citarse del Sumo Pontífice León XIII, principalmente en sus tres encíclicas «Immortale Dei», «Libertas praestantissimum» y «Au Milieu des Sollicitudes». Mas habremos de ceñirnos a transcribir solamente algunas de sus frases:

En cuanto a la Iglesia que Dios mismo ha establecido, hemos de declarar «que es grave y pernicioso error excluir la de la vida pública de las leyes y del hogar doméstico. Una sociedad sin religión no puede ser morigerada, y «sobradamente conocidos» son los frutos que ha dado de sí la llamada «moral cívica». La verdadera maestra de la virtud y la defensora de las buenas costumbres es la Iglesia de Jesucristo». (Immortale Dei).

Con frecuencia tratan algunos de cohonestar el absurdo y anticatólico principio de la separación de la Iglesia del Estado, constante e invariablemente condenado por los Sumos Pontífices, aduciendo algunos hechos que la Santa Sede, benignísima madre, expresamente lamenta, pero que se ve forzada a tolerar en evitación de males mayores.

Circunstancias gravísimas que tan sólo la misma Iglesia es la que debe apreciar, y que desde luego no concurren en las naciones católicas como nuestra España.

Cuanto sin el debido conocimiento de las cosas, o tal vez sin recta intención, se apoyan para propugnar su erróneo juicio en los hechos aludidos, deberán meditar las palabras de Su Santidad León XIII en su carta «Longinqua Oceani», de 6 de enero de 1885, dirigida a los arzobispos y obispos de Norteamérica: «Es necesario — dice —

desarraigar el error de que haya acaso quien llegue a creer que es situación apetecible para la Iglesia la que ocupa en América, y aun tal vez quien trate, a imitación de lo que allí acontece, de afirmar que es lícita y aun conveniente la separación de la Iglesia y el Estado».

Tan importante es esta cuestión en nuestros días respecto de España, que, aun a trueque de extender un tanto esta carta, no podemos renunciar a exponer las funestísimas consecuencias de la separación con las mismas grandísimas palabras de S. S. Pío IX en su encíclica «Vehementer», de 11 de febrero de 1906, en la que condena la ley de la separación de la Iglesia y el Estado en Francia: «La doctrina que proclama la conveniencia de la separación de la Iglesia y el Estado, es una doctrina absolutamente falsa y en gran manera perniciosa. En primer lugar, porque, apoyándose en este fundamento, a saber, que la religión de ninguna manera debe ser objeto del cuidado de la sociedad civil, infiere una grave injuria a Dios, autor y conservador a la vez de cada uno de los hombres de la misma sociedad, por lo que se le debe tributar culto, no tan sólo privado, sino, también, público.

«Además esta doctrina niega claramente la existencia del orden sobrenatural, puesto que establece como norma de la acción del Estado únicamente la prosperidad de esta vida caduca, que es el fin inmediato de la sociedad civil, y por completo desatiende, como ajeno a sus fines, el fin último de todo hombre, que es la eterna bienaventuranza, señalada a la humanidad para más allá de la brevedad de esta vida terrena; cuando, por el contrario, lo cierto es que, para la consecución de aquel supremo y absoluto bien, al que todas las cosas caducas están subordinadas, lejos de poner obstáculos el Poder civil, debiera más bien cooperar eficazmente.

«Altera, además, la mencionada doctrina, el orden de cosas, sabidamente por Dios establecido, orden que exige la

concordia de entrambas potestades, civil y religiosa. Porque como las dos, y cada una en su propia esfera, ejerce su autoridad sobre los mismos súbditos, necesariamente han de presentarse con frecuencia cuestiones cuyo reconocimiento y solución sean de la competencia de ambas. Ahora bien, de no haber unión entre la Iglesia y el Estado, semejantes casos serán con frecuencia semillero de dolorosos conflictos, de una y otra parte, conflictos que, oscurecido el concepto de lo verdadero, turbarán la paz de los espíritus.

«Por último, esta doctrina acarrea grandes daños a la misma sociedad, porque es imposible que esta florezca y aun subsista por largo tiempo, despreciada la religión, guía segura y maestra suprema del hombre, como salvaguardia eficaz de sus derechos no menos que de sus deberes.»

Por estas razones, los Romanos Pontífices no dejaron en todo tiempo, según lo reclamaban las circunstancias, de refutar y condenar la doctrina que preconizaba la conveniencia de la separación de la Iglesia y el Estado.

Hemos citado expresamente el ejemplo de Francia, porque más de cerca nos toca, y porque su funesta ley de separación de la Iglesia y el Estado fue primero, antes de su implantación, objeto de grandes preocupaciones al Papa León XIII, y fue después motivo de amarguras acerbas al Papa Pío X.

León XIII escribía en su encíclica «Au milieu», dirigida al clero y al pueblo francés, en 16 de febrero de 1892:

«La separación de la Iglesia y el Estado equivale a separar la legislación cristiana y divina. No nos defendremos aquí a demostrar lo absurdo de esta teoría de separación, que salta a la vista.

«Los católicos por lo tanto, se cuidarán muy bien de defender tal separación. En efecto, querer que el Estado se separe de la Iglesia, sería querer, por consecuencia lógica, que la Iglesia quedase reducida a la libertad de vivir conforme al derecho común a todos los ciudadanos.

«Es cierto que ésta es la situación de la Iglesia en algunos países. Es ésta una manera de vivir que si por una parte tiene numerosos y graves inconvenientes, ofrece por otra algunas ventajas, sobre todo cuando el legislador, por una feliz inconsecuencia, no deja de inspirarse para gobernar en los principios cristianos. Estas ventajas que jamás podrán justificar el falso

principio de la separación, ni autorizar su defensa, hacen, sin embargo, tolerante un estado de cosas que, prácticamente, no es el peor de todos.

«Pero en Francia, nación católica tradición y por la fe que en la actualidad profesa la inmensa mayoría de sus hijos, no debe consentirse que se coloque a la Iglesia en esta precaria situación, en la que se ve precisada a vivir en otros países.

«Y tanto menos pueden los católicos preconizar esta separación, cuanto mejor conocen las intenciones de sus enemigos, que la desean. Para estos últimos (lo dicen sin rebozo) esta separación significa la absoluta independencia de la legislación política de toda legislación religiosa; más aun la total indiferencia del Poder civil con respecto a los intereses de la sociedad cristiana, es decir, de la Iglesia, y hasta la misma negación de su existencia...

«Y para decirlo todo en una palabra: el ideal de estos hombres es la vuelta al paganismo; el Estado no reconocerá a la Iglesia mas que hasta el momento en que le plazca iniciar contra ella la persecución.»

Y el santo Pontífice Pío X se veía en la precisión de fulminar aquella memorable condenación de la ley de separación de la Iglesia y el Estado con estas gravísimas palabras: «Por tanto, teniendo presente Nuestro apostólico deber de defender contra toda impugnación y conservar íntegros los sacrosantos derechos de la Iglesia, Nos, haciendo uso de la suprema autoridad que de Dios hemos recibido, reprobamos y condenamos la ley que se acaba de promulgar estableciendo la separación entre la Iglesia y la República francesa; y esta condenación la hacemos por las razones que acabamos de exponer, es a saber: porque irroga una gravísima ofensa a Dios, de quien oficialmente reniega al declarar desde el primer momento que la República rechaza por igual todo culto religioso; porque viola a la vez que el derecho natural y de gentes, la fe debida a los pactos públicos; porque es contraria a la más divina constitución de la Iglesia, no menos que a su libertad y derechos inalienables; porque es aversiva de la justicia, conculcando el derecho de propiedad de la Iglesia, legítimamente adquirido por infinidad de títulos y solemnemente reconocido en el Concordato; porque ofende gravísimamente la dignidad de la Sede Apostólica, así como a nuestra persona y al Episcopado, Clero y fieles católicos de Francia.»

La subordinación de la Iglesia al Estado

Hemos insistido, Venerables Hermanos y Amados Hijos, un tanto sobre la cuestión tan candente de la separación de la Iglesia y Estado en España, por constituir un como postulado del nuevo orden de cosas, en el que vienen a coincidir las opiniones de cuantos no inspiran su criterio en las enseñanzas de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica.

Consecuencia funesta de este principio, de considerar al Estado independiente de la Iglesia, es la de equiparar ésta a una de tantas corporaciones como dentro del Estado viven y de él reciben su razón jurídica de ser, dependiendo *consiguientemente* del mismo en su actuación y atribuciones.

Largo tiempo hace que en el decurso de la Historia se mostraron los Estados codiciosos de la libertad e independencia de la Iglesia, a la que en vano han tratado de avasallar a la fuerza.

La Iglesia, sociedad perfecta, soberana e independiente, y por su naturaleza, origen y fin superior al Estado, *ni ha sido, ni es, ni aunque por una suprema injusticia se intentase podrá ser considerada nunca como una corporación subordinada al Estado.*

Inútil será todo nuevo conato del Poder civil contra la sagrada supremacía de la Iglesia. Ha demostrado apodicticamente la Historia de veinte siglos que los Estados usurpadores de las divinas prerrogativas de la Esposa de Jesucristo se labran su propia ruina.

Algunos pretenden, decía Su Santidad Pío IX (encíclica «Quanta Cura») audazmente renovar los «depravados errores» de los novadores, los cuales enseñan que la Iglesia y su suprema autoridad deben estar sujetas al Estado. Y no se avergüenzan de afirmar que las leyes de la misma Iglesia no obligan en conciencia si no son promulgadas por la autoridad civil y que los hechos y decretos de los Romanos Pontífices pertenecientes a la religión necesitan para obligar la sanción y aprobación, o al menos el asentimiento de la autoridad secular.

Denunciaba este gravísimo error, ya proscrito por Su Santidad Pío IX, el Santo Padre León XIII (encíclica «Libertas»), diciendo: «No pudiendo otros negar la existencia a la Iglesia, le atribuyen la naturaleza y los derechos propios de una sociedad perfecta y quieren que su poder, despojado de toda autoridad legislativa, judicial y coercitiva, se limitase a dirigir por la exhortación y la persuasión a aquellos, que de buen grado y por propia voluntad a ella se sometiesen. De esta forma, estrechan y extenuan su autoridad, su magisterio y toda su eficacia, o de tal modo exageran el poder civil que quieren someter a la Iglesia como una de las demás Asociaciones libres de los ciudadanos a la dependencia y a la dominación del Estado».

Sentando a continuación, según la doctrina católica, el principio incommovible —que está establecido por Dios el que la Iglesia posea la naturaleza y los derechos todos de una sociedad legítima, suprema y acabadamente perfecta».

De esta falsa teoría anticatólica de la subordinación de la Iglesia al Estado, deducen los enemigos de ella atribuciones del Poder civil sobre derechos inalienables, que Jesucristo la confió, y que con toda entereza han defendido los Soberanos Pontífices.

Convendrá fijéis al menos vuestra atención en las principales extralimitaciones del Estado, que de aquí traen su origen, y que son proclamadas en nuestros días como conquistas de la soberanía popular.

Nos referimos principalmente a la educación de la niñez y de la juventud, a la existencia y actuación de las Órdenes y comunidades religiosas, a la independencia de los prelados y sacerdotes en su sagrado ministerio y a la inmunidad eclesiástica.

La doctrina católica sobre todas estas prerrogativas de la Iglesia ha sido maravillosa y ampliamente expuesta en documentos pontificios, que

debieran tener constantemente presentes todos aquellos católicos, que quieren vivir inmunes del contagio del ambiente doctrinal deletéreo que los rodea.

Sería suficiente a nuestro propósito poner de relieve el sentir de la Iglesia acerca de estas trascendentales cuestiones, citando las proposiciones del «Syllabus» a ellas pertinentes.

Refiérense a la «enseñanza y educación» de la juventud las proposiciones 43, 47 y 48, en las que se condena la doctrina que afirma que «todo el régimen de las escuelas públicas, en donde se forma la juventud de algún Estado cristiano, a excepción en algunos puntos de los Seminarios episcopales, puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil; y de tal manera puede y debe ser de ella, que en ninguna otra autoridad se reconozca el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de los grados, ni en la elección y aprobación de los maestros» (43); que «la óptima constitución de la sociedad civil exige que las escuelas populares, concurrendas de los niños de cualquiera clase del pueblo, y en general los Institutos públicos, destinados a la enseñanza de las letras y a otros estudios superiores, y a la educación de la juventud, estén exentos de toda autoridad, acción moderadora e injerencia de la Iglesia, y que se sometan al pleno arbitrio de la autoridad civil y política, al gusto de los gobernantes, y según la forma de las opiniones corrientes del siglo» (47), y que «los católicos pueden aprobar aquella forma de educar a la juventud, que esté separada, disociada de la fe católica y de la potestad de la Iglesia, y mire solamente a la ciencia de las cosas naturales, y de un modo exclusivo, o por lo menos primario, los fines de la vida civil y terrena» (48).

Trata de las «comunidades religiosas» la proposición 33, que reprueba la opinión de los que juzgan que «deben abrogarse las leyes que pertenecen a la defensa del estado de las Comunidades religiosas, y de sus derechos y obligaciones; y aun el Gobierno civil puede venir en auxilio de todos los que quieran dejar la manera de vida religiosa que hubiesen comenzado, y romper sus votos solemnes; y puede completamente extinguir igualmente las mismas Comunidades religiosas, como asimismo las iglesias, colegiatas y los beneficios simples, aun los de derecho de patronato, y sujetar y reivindicar sus bienes y rentas a la administración y arbitrio de la potestad civil».

Necesario juzgamos para contrarrestar la propaganda incaica que se está haciendo contra las Órdenes y Comunidades religiosas en nuestra Patria, recordar las siguientes palabras del Santo Padre Pío IX (encíclica «Quanta Cura»), que constituyen «su mejor apología».

Hablaba del libertinaje desenfrenado de los tiempos modernos y agregaba: «Por esto esta clase de hombres libertinos persiguen con odio cruel a las Comunidades religiosas, sin tener en cuenta sus inestimables servicios prestados a la religión, a la sociedad y a las letras; y, al denigrarlas como inútiles y destituidas de todo legítimo derecho a la existencia, se hacen eco de las calumnias de los herejes. Porque, como tan sabiamente enseñaba Pío VI, Nuestro predecesor de santa memoria (Epist. ad Card. Rochefoucauld. 1. Mar. 1771), la abolición de las Órdenes religiosas tiende a destruir un género de vida, que hace profesión pública de seguir los consejos evangélicos, un estado recomendado en la Iglesia como conforme a la doctrina apostólica, y, finalmente, ofende a los insignes fundadores, que hoy veneramos en los altares y que establecieron sus Institutos por inspiración de Dios».

Vindica la libertad e independencia del «Sagrado Ministerio» la proposición 44, que declara inadmisibile la teoría que sostiene que «la autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que tocan a la Religión, costumbres y régimen espiritual y así puede juzgar de las instrucciones que los Pastores de la Iglesia suelen dar para dirigir las conciencias, según lo pide su mismo cargo, y puede, asimismo, hacer reglamentos para la administración de los sacramentos y sobre las disposiciones necesarias para recibirlos».

Finalmente defiende la «inmunidad eclesiástica», contra la que van expresamente los artículos 12, IV y 21 del proyecto de Constitución, en las proposiciones 30, 31 y 32, cuya doctrina se establece nuevamente en los cánones 120 y 121 del Código vigente de Derecho canónico.

No puede, pues, ningún católico sostener que «la inmunidad de la iglesia y de las personas eclesiásticas trae su origen del Derecho civil» (30); que «el fuero eclesiástico en las causas temporales de los clérigos, ahora sean éstas civiles, ahora criminales, debe ser completamente abolido aun sin necesidad

de consultar a la Sede Apostólica, y a pesar de sus reclamaciones» (31), y que «la inmunidad personal, en virtud de la cual los clérigos están libres de quintas y de los ejercicios de la milicia, puede ser abrogada sin violar en ninguna manera el derecho natural ni la equidad: antes el progreso civil reclama esta abrogación, singularmente en las sociedades constituidas según la forma de más libre gobierno» (32).

¡A cuán lastimosas derivaciones conduce el principio anticristiano, absurdo y disolvente de que el Estado es la única fuente y el origen de todos los derechos!

Las libertades modernas (Art. 12, 18, 31)

Brevísimas indicaciones bastarían para orientarnos sobre las libertades llamadas modernas, que han sido consideradas como la más preciada conquista de la revolución francesa; y que son consideradas como el patrimonio de las democracias enemigas de la Iglesia.

Para formar juicio exacto de la naturaleza de estas libertades, es necesario conocer la cenagosa fuente de que dimanar.

Es preciso, siguiendo las sapientísimas indicaciones de Su Santidad León XIII (encíclica «Immortale Dei»), ir a buscar esta fuente remota en los pestíferos manantiales de la Reforma protestante del siglo XVI, que, después de haber causado tantos trastornos en la religión, vino, a través de la filosofía, a subvertir siglos más tarde la misma sociedad civil.

«En esta fuente se ha de buscar el origen de los «principios modernos de la libertad desenfrenada», ideados y promulgados en las grandes perturbaciones del siglo último, como principios y fundamentos del «derecho nuevo», desconocido anteriormente, y que está en disconformidad no sólo con el derecho cristiano, sino con el mismo derecho natural.»

Ese derecho nuevo no es otra cosa, según las palabras mismas de Su Santidad Pío IX (encíclica «Quanta cura»), que «la aplicación del principio absurdo e impío del naturalismo a la sociedad civil.»

Sería suficiente conocer los nombres que han dado los Sumos Pontífices a estas libertades modernas.

«Locura» las llama Gregorio XVI (encíclica «Mirari vos»); «Libertades de perdición» las denomina Pío IX (encí-

clica «Quanta cura») con frases de San Agustín: «libertinaje más que libertad», dice León XIII (encíclica «Immortale Dei»), que son las libertades modernas, a las que aplica el calificativo de San Pedro Apóstol (I Pet. II, 16) «velamen malitiae», «como libres, sí, mas no cubriendo la malicia con capa de libertad».

Síntesis admirable de cuanto la Santa Iglesia ha enseñado de las tan decantadas libertades es la luminosísima encíclica «*Libertas praestantissimum*», que en 20 de junio de 1888 publicó el Soberano Pontífice León XIII.

Hace en ella un examen detenido de las libertades, que, como otros tantos derechos del ciudadano, proclaman diversos artículos del proyecto de Constitución, y resumiendo la doctrina de la Iglesia, dice: «De lo expuesto se sigue que en modo alguno es lícito pedir, defender, conceder la plena libertad de pensar, enseñar, de escribir y de cultos, como si estas libertades fueran de un derecho concedido al hombre por la Naturaleza. Porque si en verdad la Naturaleza hubiese otorgado estas libertades, existiría el derecho de substraerse a la soberanía de Dios, y no habría ley capaz de regular la libertad humana.»

Doctrina católica, que próximo ya a su muerte vuelve a recordar el Sumo Pontífice al arzobispo de Bogotá por medio del cardenal secretario de Estado en la carta «Plures» de 6 de abril de 1900, casi con las mismas palabras: «De estos principios —habla de los principios del liberalismo— que la Sede Apostólica «ha tantas veces condenado como falsos y opuestos a la doctrina católica», fluyen, naturalmente, como de una fuente cenagosa, «las llamadas libertades modernas», o sea, «la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la libertad de conciencia».

Omitiendo por razón de la brevedad las oportunísimas enseñanzas pontificias acerca de la licitud de cada una de las citadas libertades, seamos permitido recordar al menos, por la oportunidad especial, unas líneas del áureo documento sobre la libertad humana que condena la libertad de cultos.

Hablando de la libertad de cultos en los individuos, dice: «Tenía esa libertad como base el dar a cada cual facultad para profesar la religión que más le agrade, o no profesar ninguna. Conceder a los hombres esta libertad es darles facultad para pervertir o abandonar impunemente una obligación santísima y tornarse, por tanto, al mal,

volviendo la espalda al Bien inmutable, lo cual como hemos dicho, no es libertad, sino depravación de ella y servidumbre del alma servida bajo el pecado» encíclica «Libertas»).

Y, refiriéndose a continuación a la libertad de cultos en las naciones, agrega: «Esta libertad de cultos pretende que el Estado no debe rendir a Dios culto ninguno; y que ninguna religión debe obtener sobre las demás trato de preferencia, sino que todas deben ser consideradas iguales, sin tener para nada en consideración al pueblo, cuando el pueblo profesa la religión católica. Para lo cual sería preciso, o que las «ciudades civiles no tuvieran deberes para con Dios, o que impunemente puedan dejar de cumplirlos, cosas ambas igual y manifestamente falsas. Debe la sociedad civil, en cuanto tal, reconocer a Dios como su principio y autor, y, por consiguiente, debe rendir a su poder soberano y a su autoridad el homenaje de su culto. La justicia a la par que la razón vedan al Estado el ser ateo, y le vedan asimismo guardar los mismos derechos a todas las llamadas religiones, lo cual equivale al ateísmo».

Deberes de la hora presente

Claramente, Venerables Hermanos y amados Hijos, queda demostrada por lo expuesto la gravedad de la situación religiosa de la Patria en la hora presente.

Y de esta gravedad precisamente surgen deberes, que ningún católico en conciencia puede declinar.

Surge en primer término el deber de mantenernos «fortes in fide» (I. Pet. v. 9) «firmes en la fe», unidos inseparablemente por el lazo irrompible de nuestras santas creencias, que debemos estar dispuestos a conservar y a defender a toda costa.

Y para todos no hay otro faro, que nos guíe al puerto de la verdad y de la salvación, más que la luz indeficiente del Vaticano.

En circunstancias como las que atravesamos urge la norma, que daba el Santo Padre Leon XIII a los obispos de Colombia (Cons. circ.): «Deben los obispos y fieles procurar con todas sus fuerzas que no haya más que un solo pensamiento y un solo parecer en cuantas cosas la autoridad de la Sede Apostólica haya determinado sin dejar lugar a opiniones diversas».

No ha sido otra la norma seguida en esta Carta pastoral, en la que hemos procurado reproducir con toda fidelidad, no solo las enseñanzas, sino siem-

pre que ha sido posible, hasta las palabras mismas de los Soberanos Pontífices, oráculos de la verdad, que tienen a imitación del Divino Maestro palabras de vida eterna» (Joan. vi. 1).

Graves son los peligros de doctrina, que por doquiera os crean en estos tiempos de iniquidad. «No os dejéis seducir» os diremos con el apóstol San Pablo (I Cor. xv. 33), «las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estad alerta, oh justos, guardaos del pecado; porque entre nosotros hay hombres que no conocen a Dios, dígoles para confusión vuestra».

Evitad cuanto os sea posible el trato con los enemigos de la Iglesia, y sobre todo huid como de un aspid de la mala Prensa, de esa Prensa impía, blasfema y procaz, que es el principal ariete demoleedor de la fe, de las buenas costumbres y aun del orden y de la tranquilidad y prosperidad de los pueblos.

A esta firmeza y unidad de doctrina es necesario unir la constancia y fortaleza en la acción.

Son momentos de lucha por los altísimos intereses de las almas, y para obtener la corona de la victoria es preciso pelear denodadamente.

Los católicos que tengan representación en las Cortes, están gravemente en conciencia obligados a propugnar por cuantos medios legítimos estén a su alcance los sacrosantos derechos de la Iglesia, preteridos en el proyecto de Constitución.

Los periódicos católicos nacionales y regionales, que tan heroicamente, sin reparar en sacrificios, sostienen enhiesta la bandera inmaculada de los derechos y de la doctrina de Jesucristo, deben continuar combatiendo sin desmayo, con el apoyo decidido de los buenos y con la bendición amplísima de la Iglesia, que contempla agradecida su abnegación y su valor.

Los hijos todos de la Iglesia Católica en España, ante el riesgo que corren su fe y sus santas tradiciones, deben salir de su retraimiento en momentos tan críticos para actuar en la vida pública por sus altares y por sus hogares.

No olvidemos que las armas más eficaces de nuestra milicia han sido, son y serán siempre nuestras obras unidas a la oración y a la penitencia.

Se impone en esta hora una vida intensamente piadosa, apartada de las

diversiones y pasatiempos del mundo; se impone una santa austeridad de costumbres, propia de los tiempos de penitencia y propiciación; se impone un *retorno sincero a Jesucristo*, nuestro Rey y Soberano Dueño.

Y para obtener más fácilmente esta gracia, os exhortamos muy encarecidamente a que recurráis a la mediación omnipotente de la Virgen Inmaculada, por medio de la cual hemos de renovar nuestra consagración al Corazón Sacratísimo de su divino Hijo.

Seámos, Venerables Hermanos y muy amados Hijos, prenda de las gracias celestiales, que de corazón para todos imploramos, la bendición pastoral que os damos en el nombre del *† Padre* y del *† Hijo* y del *† Espíritu Santo*.

En la fiesta del Apóstol Santiago, Patrón de España, a 25 de julio de 1931.

30.- "La retención del Sr. Vicario general y de un documento eclesiástico en la frontera de Irún."

S.f. *BOE de Vitoria*, año 67, 1 de septiembre de 1931, núm. 19, págs. 609-611.

Con el fin de cumplir el deber que al Vicario general impone el canon 369 de dar cuenta al Excmo. Sr. Obispo diocesano de los principales asuntos de la Curia el M. I. Sr. D. Justo de Echeguren se dirigía una vez más a Anglet el día 14 de Agosto último, llevando en su cartera diversos documentos y entre ellos un sobre que días atrás había recibido con la indicación de «reservado» y para el Sr. Obispo de Vitoria, dentro de otro exterior que venía dirigido al mismo Vicario general, quien, por tanto no se creyó autorizado a abrirle hasta el momento en que fuera necesario.

Interrogado en la frontera por el catabinero de servicio si llevaba en su cartera dinero o efectos de crédito contestó negativamente y para comprobarlo, a instancias del mismo agente, mostró abierta su cartera y todos los documentos que en ella llevaba incluso el sobre cerrado, cuando le llegó el turno, el cual fué abierto en el acto sin el menor recelo ni resistencia, en la seguridad de que nada contenía que fuera objeto de declaración en la Aduana.

Al abrirlo y examinarlo, como al azar, el mencionado agente y encontrar en él alguna palabra relativa a bienes se creyó en el deber de consultar a su superior si el referido documento era algún efecto de crédito. Examinado detenidamente por el vista éste declaró que no lo era y en consecuencia le entregó en el acto a dicho Sr. Vicario general; pero, a poco de haberse éste sentado en el tren, se le presentó de improviso el mismo vista acompañado de un agente de policía que se incautó del documento, el cual era de correspondencia reservada entre dos Prelados de la Iglesia y sobre asuntos a ésta concernientes.

No sólo fué retenido el documento por la autoridad civil sino el mismo Sr. Vicario general fué retenido también y sometido a continua vigilancia, primero en la Comisaria de Vigilancia de Irún por espacio de seis horas, después por cuatro más en el Gobierno civil de San Sebastián y por otras cuarenta y una en la casa de los Sres. de Zulueta (D. Luis) en la misma ciudad, hasta que fué puesto en libertad en la tarde del día 16 de Agosto.

En unas manifestaciones que el Sr. Vicario General hizo a la prensa de San Sebastián con el fin de rectificar algunas de las afirmaciones hechas, con ese motivo, por la *Hoja Oficial del Lunes* de Guipúzcoa, dijo el Sr. Echeguren, entre otras cosas, que el señor Gobernador le llamó a su despacho y le comunicó que quedaba en plena libertad, añadiéndole que estaba persuadido de que las cosas eran tal como dicho Sr. Echeguren las había declarado, y que por tanto, no había incurrido en culpabilidad alguna, ni había

estado propiamente detenido, aunque la Prensa así lo había dicho; que agradeció cordialmente al Sr. Gobernador estas manifestaciones y aquel ambiente de amabilidad en que tuvo la bondad de recibirle, tanto en esta entrevista como en la primera, pero que añadió que esto no significaba aprobación de lo que se había hecho con él y con el referido sobre que llevaba para su Prelado: que, antes al contrario, hacía constar respetuosamente su protesta por la violación de su fuero, por la privación de libertad a que, sin motivo alguno, había sido sometido y, especialmente, porque se había violado la libertad de la Iglesia en la correspondencia entre sus Prelados y se había retenido dicho documento; que, aunque ignoraba su contenido, estaba bien seguro de que no era *en manera alguna documento de conspiración contra la República*, sino de simple ejercicio de la misión divina de la Iglesia y defensa de sus derechos; y que nada tenía que temerse de la Iglesia, *que había acatado sinceramente la República y que es la primera en desear y fomentar el bienestar y la paz social.*

* * *

También publicaba a continuación la misma prensa las manifestaciones de gratitud del Sr. Vicario general en los siguientes términos que aquí reproducimos por expreso encargo del mismo: «El señor Echeguren nos ha rogado también que hagamos publico lo muy vivamente agradecido que está a los señores diputados de la minoría vasco navarra, por sus amables visitas y generosos ofrecimientos y por sus eficaces gestiones cerca del señor Ministro de la Gobernación; que lo está así mismo a toda la Prensa católica y a cuantos con ella se han puesto tan noblemente al lado de la Santa Iglesia nuevamente ultrajada; que lo está de una manera especialísima a sus queridísimos amigos los Sres. de Zulueta (D. Luis), que tan amable hospitalidad le han dado en su cristianísima mansión y tan grata le han hecho su estancia en esta ciudad, aunque lo fuera en calidad de retenido y día y noche vigilado; al venerable Clero y fieles, especialmente de San Sebastián, que en gran número han tenido la bondad y caridad de visitarle y prodigarle muy fraternales consuelos; y singularmente a los seminaristas diocesanos de estancia en Saturrarán, que tuvieron la delicadísima atención de suspender espontáneamente sus recreaciones y festejos particulares del gran día de la Asunción de Nuestra Señora, en señal de su pena y de su protesta ante esta nueva violación de la libertad de nuestra Madre la Iglesia.

Finalmente, el Sr. Echeguren nos manifestó que lamenta vivísimamente que este incidente pueda servir de ocasión de nuevas molestias y amarguras para el apostólico, virtuosísimo y amadísimo Sr. Cardenal Primado, a quien más que nunca, dijo el Sr. Echeguren, están hoy unidos todos los buenos hijos de la Santa Iglesia y con él dispuestos a dar en obsequio y defensa de ella todo cuanto quiera pedirles el Señor, como dueño absoluto que es de cuanto somos y cuanto tenemos».

31.- "Carta abierta de la Junta Provincial de Acción Católica de Guipúzcoa al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

15 de agosto de 1931, *BOE de Vitoria*, año 57. 1 de septiembre de 1931, num. 19, págs. 606-609.

Excmo. Sr.

Aunque se ha anunciado que su visita a San Sebastián es con carácter particular, esta Junta no puede menos de aprovechar la ocasión para exponer a V. E. el penoso estado de ánimo que disposiciones del Gobierno Provisional de la República—que se permite calificar de arbitrarias—mantiene todavía en los católicos guipuzcoanos y de la Diócesis toda.

El doloroso agravio recibido en la expulsión inmotivada del Excmo. Sr. Obispo diocesano, causó honda herida, reflejada en los muchos telegramas remitidos a V. E. y al Presidente del Gobierno.

Algo vino a calmar los ánimos el saberse que el M. I. Sr. Vicario General de la Diócesis presentó a V. E., en 20 de mayo próximo pasado, razonadísimo alegato acompañado de instancia de revisión de la medida del Gobierno, que creyó acogidos por V. E. con el más vivo interés y con el mejor deseo de conocer la verdad y de rectificar una vez que llegara a persuadirse de que aquella orden fué motivada por inexactas informaciones.

Esta apreciación del recurrente pudo hacer dar especial crédito a las palabras que, a modo de lenitivo, dijera a nuestro Rvdmo. Prelado el Excmo. Señor Gobernador Civil de Alava cuando hubo de acompañarle a la frontera: «Señor Obispo, esto será cosa de pocos días».

Los «pocos días» van llegando al trimestre: pasado mañana, 17 de agosto, hará exactamente tres meses de aquella dolorosa fecha...

La petición que desde Guernica y luego, apenas llegados a Madrid, hicieron al Gobierno los autorizadísimos Diputados representantes de la Minoría (aquí mayoría) pro Estatuto Vasco, solicitando se facilitara el pronto regreso del Prelado, ha sido otro momento de esperanza, ardientemente avallado por los millares de telegramas—verdadero clamor popular—que, como es público, se remitieron de toda la Diócesis al Gobierno.

Y esto es lo que lamentablemente nos vemos hoy obligados a hacer resaltar en el día de hoy: la desatención del Gobierno a la autoridad de las razones y del número ha sido la más grande que darse puede. No se ha recibido, bajo ninguna forma, la más leve respuesta, cuánto menos razón alguna que desvirtuase las sostenidas por nuestros alegatos.

Permita, Excmo. Sr., que por su mediación hagamos llegar al Gobierno toda nuestra honda y serena protesta por tal desatención, que nos hiere vivamente, considerada en su doble significación de ofensa a nuestra Religión y a la Justicia.

Tanto más irritante es el desprecio, cuanto que telegramas menos numerosos y de menos trascendencia han sabido ser recogidos con toda diligencia por el Gobierno.

Ni se diga que nuestras protestas se reducen a un fácil procedimiento de coleccionar adhesiones más o menos forzadas o hipotéticas, porque es la verdad—y esto quisiéramos que lo tuviese bien en cuenta, Excmo. Sr.,—que los allos de la protesta y petición reiteradamente nos han expresado su deseo de manifestar la realidad de su número, acudiendo personalmente a apoyar la demanda.

No es nuestro ánimo provocar semejantes manifestaciones, ni de otra manera alguna hemos querido echar leña al fuego, por lo que ahogando nuestra justa indignación,—y esto quisiéramos que se abonará en nuestro favor—hemos soportado que se hicieran campañas «populares» de cierta Prensa, con refuerzo de alienígenas y «educadores» a distancia, calificando a nuestro venerable Prelado de «trabucaire», «inculto», «montaraz», «faccioso», «indeseable»... y otras muchas cosas tan falsas como malévolas.

Alimentamos cierto motivo de esperanza en que se haga justicia y se nos devuelva a nuestro amadísimo Pastor. Queremos referirnos a la serena y contundente repulsa que de labios de Vucencia oyeron últimamente en las Cortes Constituyentes intérpretes malignos de la concurrencia a Ezquioga. Esto nos hace creer que, aunque acaso menos burdas, sabrá también reconocer aquellas informaciones como del mismo género.

Por ello nuevamente pedimos a Vucencia sin desesperar de su «rectitud y espíritu de justicia» en que se nos hizo constar: pedimos asimismo al Gobierno, escuche la voz de los católicos vascos y dé su verdadero valor a las frases provocativas, a los vergonzantes telegramas de oposición y a las amenazas infundadas de quienes verdaderamente «forjaron» el conflicto y quieren mantenerlo en pie, preciándose por ello de «tutelares de la República».

Créanos, señor Ministro, que de este modo es como podrá ir ganando el afecto y gratitud de este pueblo, que tan hondamente sabe sentirlos.

A los tristes hechos arriba señalados, ha venido a sumarse el incidente—producido a última hora—con la detención del M. I. Sr. Vicario general de la Diócesis.

Lógica consecuencia del extrañamiento del Sr. Obispo—y provocada por tanto por el Gobierno—era para aquél la necesidad de la correspondencia como medio de seguir rigiendo su diócesis, de la que no ha sido desposeído. Y era preciso que

la Autoridad Civil tutelase el libre ejercicio de la misma. (Cuanto menos habría de entorpecerla—contra todo derecho—y menos aun por tan insólitas maneras.)

Ha de resolverse también este asunto pronto y satisfactoriamente, para que no perdure como nuevo e irritante agravio a la Autoridad Eclesiástica, ni pueda en modo alguno ni por nadie interpretarse como calzaga para enconar la anterior situación, ya de suyo tan delicada.

Espera esta Junta, Excmo. Sr., esperan todos los buenos católicos de Guipuzcoa, pronta y leal respuesta, en actos de buen gobierno, de quienes solo de este modo—y para todos—deben ejercerse. Porque no quisiéramos quedarnos con estas dudas: Ya que en España no existe actualmente Constitución, ¿existe el Derecho Canónico y Concordato? ¿Existen los derechos individuales «inalienables e imprescriptibles»? ¿Existe algún derecho?

San Sebastián, 15 de agosto de 1931.

*La Junta Provincial de
Acción Católica de Guipuzcoa.*

32.- "El nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini, entregó ayer al jefe del Gobierno la contestación del Vaticano".

"El Sol", 1 de octubre de 1931.

A las diez y media llegó ayer a la presidencia el cardenal Ilundain, arzobispo de Sevilla, y estuvo conferenciando con el Sr. Alcalá Zamora hasta las doce.

Un cuarto de hora después llegó el nuncio, monseñor Tedeschini, y la entrevista que celebró con el jefe del Gobierno duró hasta una hora y cuarto.

Al salir monseñor Tedeschini habló con un periodista; pero el diplomático vaticanista se limitó a decir que había tratado con el presidente de las cuestiones religiosas de la actualidad.

El Sr. Alcalá Zamora recibió a los periodistas a la una y media, y les dijo:

- Las visitas más salientes de hoy han sido las del cardenal Ilundain y el nuncio de Su Santidad. Dos entrevistas afectuosas y gratas.

- ¿Ha traído el nuncio la tan esperada respuesta del Vaticano?, preguntó el informador.

Y añadió:

- Porque lo hemos visto con un sobre que debía contener bastantes papeles.

- Sí, pero a mí no me los ha leído. Y no puedo decir más: afectuosas y gratas conversaciones.

- Entonces, si han sido así -arguyó el periodista-, habrá mayor facilidad para discutir en la semana próxima el tema religioso de la Constitución.

- Depende -contestó- esa facilidad de que todos tengamos la serenidad para comprender que a España le conviene una Constitución de paz y libertad con la obligada independencia y salvaguardia del Estado. Sobre éste, como sobre otros temas, insisto en que hablaré, a pesar del consejo o el reproche que con frecuencia llega a mí para que no intervenga. Comprendo que el móvil de ese parecer es incluso de afecto en los más de los casos, recordándome con prudencia y solicitud que no me gaste; pero yo creo que la poca fuerza personal que haya podido ganar en mi vida la debo al servicio de España y de la República, y nunca mejor em-

pleada que gastándola, porque, eso, como todo, se tiene para gastarlo en bien del país y si es con detrimento de mi conveniencia, señal de que he sabido cumplir con mi deber.

Por otra parte, el peligro de coacción, aún voluntaria, que algunos señalan en mis intervenciones no puede existir, pues relevo de mi influjo, siempre escaso, hasta la fuerza parlamentaria, poco numerosa, que voluntariamente está más identificada conmigo.

Para justificar mis intervenciones, que no deseo, pero que no rehuyo, recuerdo que, con razón, dado el puesto que las circunstancias y la confianza del país me han dado, se me considera justamente el más responsable de cualquier daño. Por ello, recordando los versos clásicos, "¿por qué con más albedrío tengo menos libertad?", digo yo: ¿Por qué con más responsabilidad, voy a tener menos iniciativa?.

Pasando a otro asunto -añadió el Sr. Alcalá Zamora-, quiero comentar la generosidad y delicadeza de Rafael Sánchez Guerra sacrificando en aras de la concordia su candidatura. Mucho mayor que su sacrificio es el mío, porque nunca ha parecido justo que quien se arriesgó en la revolución como el que más y obtuvo en dos provincias de España votación enormemente superior al promedio de la que ha asegurado la representación, no haya podido encontrar un puesto en el Parlamento. Por eso hago las manifestaciones que merece Rafael y me dicta mi afecto. Yo no he hecho comentario alguno ante el caso singular de ser el único elemento del Gobierno que se sienta en la Cámara sólo con votos de amistad personal, sin representar ningún otro partido de la conjunción; pero el caso de Sánchez Guerra me impresiona mucho más que si se tratara de mí mismo.

No volverá a España el cardenal Segura

La visita que el nuncio, representante diplomático del Papa en España, hizo ayer al mediodía al presidente del Consejo y a los ministros de Gobernación y Justicia ha tenido una importancia trascendental.

El nuncio entregó a dichas personalidades la contestación del Vaticano al documento elevado por el Gobierno español respecto a la actuación y la conducta política del cardenal primado, doctor Segura.

Sabemos positivamente que esa contestación es plenamente satisfactoria para el Gobierno y que el Vaticano ha acordado que el cardenal Segura no vuelva a España.

El nuevo primado será nombrado de acuerdo con el Gobierno español.

La noticia la confirmó el ministro de la Gobernación ayer tarde al hablar con los periodistas en los pasillos del Congreso, quien al preguntársele el objeto de la visita que le había hecho el nuncio dijo:

- El encargado de decir a ustedes lo que hay es D. Fernando de los Ríos. No obstante, yo puedo adelantar a ustedes que la cuestión entre el Gobierno y el Vaticano respecto del cardenal Segura ha quedado resuelta. Esto es, en síntesis, todo.

- Entonces, ¿el cardenal Segura no volverá a España?

- Desde luego. Y esto es lo más interesante.

La diócesis de Toledo quedará vacante

Avanzada ya la noche de anteayer, se recibió en España un telegrama oficial de la Santa Sede, según el cual el Vaticano había aceptado la dimisión que del cargo de primado de España y arzobispo de Toledo había presentado el cardenal Segura después de la actuación política de dicho prelado al advenimiento de la República, y que dio motivo a su expulsión de España.

La noticia que recibió el ministro de Justicia inmediatamente la comunicó telefónicamente a sus compañeros de Gobierno. Era un asunto bastante escabroso, y conociendo la política que en esos asuntos diplomáticos sigue la Santa Sede, naturalmente tenía que recibirse con la natural satisfacción por parte del Gobierno que el Vaticano hubiese aceptado las indicaciones que de España había recibido y que en los medios diplomáticos de la Santa Sede se hubiese comprendido la realidad del problema que el cardenal primado planteó, y con el meditado estudio que la delicadeza del asunto planteaba, hubiese resuelto en forma tan satisfactoria para los deseos de la República española.

Ayer, el nuncio comunicó oficialmente la noticia a los ministros, que se mostraban verdaderamente satisfechos.

El asunto se ha resuelto dejando a la diócesis de Toledo como diócesis vacante. Según tenemos entendido, la diócesis será desempeñada en lo sucesivo por un obispo auxiliar que se nombrará al efecto, y las cuestiones adherentes a la silla primada serán por de pronto desempeñadas por el cardenal Vidal y Barraquer desde su archidiócesis de Tarragona.

Algunos diplomáticos que por haber desempeñado puestos cerca del Vaticano tienen motivo para conocer la importancia de esta resolución decían que el éxito era rotundo, que la Santa Sede había comprendido perfectamente cual es el momento católico español y que era la primera

vez que el Vaticano se había decidido a adoptar una medida de este género en su historia.

Nuevas manifestaciones del jefe del Gobierno

Todo el interés de los periodistas estaba concentrado ayer tarde en conocer la resolución completa de Roma respecto a la solución dada al caso del cardenal Segura, y para ello buscaron incesantemente al ministro de Justicia, encargado de decir a la Prensa todo lo relacionado con el asunto.

El Sr. De los Ríos, tan pronto como llegó al Congreso, pasó al despacho de ministros, y después de hablar unos momentos con el jefe del Gobierno salieron ambas personalidades juntas. Al encontrarse con los periodistas el Sr. Alcalá Zamora, cuyo semblante reflejaba alegría, dijo:

- Mi transparencia en el diálogo con la Prensa hoy al mediodía fue a medias, porque quería reservar al ministro de Justicia principalmente y a los demás compañeros de Gobierno una noticia que en aquel momento tenía. Y era ésta: que habiendo sido presentada y admitida al cardenal Segura la dimisión de la silla primada de Toledo, esta sede está vacante, e inmediatamente se convocará por el deán de la catedral al Cabildo toledano, conforme al Derecho canónico, para proceder al nombramiento de vicario particular, como ocurre en toda sede vacante.

No quiero hacer ningún comentario, porque los dejo todos al ministro de Justicia. Por mi parte, sólo diré que, atendiendo a nuestra línea de conducta y a mi significación, me satisfacen la forma en que ha llevado a cabo el Gobierno su gestión y el resultado obtenido.

A una indicación del presidente el ministro de Justicia explicó el asunto manifestando:

- Yo quiero decir a ustedes sobre esta fórmula de admisión de dimisión lo siguiente: que la suspensión de temporalidades que nosotros podíamos hacer ha sido resuelta por Roma al declarar vacante la Primada de Toledo. Esta ha demostrado que por nuestra parte y en nuestra actitud no ha habido ningún propósito partidista, sino que era una medida ultramotivada en razón de los debates del Gobierno de exigir acatamiento pleno al Poder civil y reconocimiento absoluto de éste en todo lo referente a la gobernación interior del Estado.

Este hecho de declarar sede vacante la silla primada de Toledo es el primer caso en la Historia de los tiempos políticovaticanistas modernos. Sólo hubo dos casos de analogía con el presente del cardenal Segura: uno, en Francia, en 1927, determinado por el cardenal Billot; y digo que tiene éste una analogía leve porque el cardenal Billot fue depuesto en su cargo por ponerse al lado de "Action Française" cuando ya este periódico

había sido condenado por el papado, y el segundo caso fue el del arzobispo de Praga monseñor Johuin, que fue removido de su puesto no por actos realizados por él, sino determinados por una prohibición del Estado checoslovaco por incomprensión del idioma, ya que dicho prelado fue nombrado en los tiempos del Imperio austriaco, y el gobierno checo quería que aquel arzobispo conociese la lengua de los fieles que dirigía. De modo que el caso del cardenal Segura es único en la historia canónico-política de la Iglesia.

Trascendencia que yo voy a leer: lo primero, que las manifestaciones de censura de que ha sido objeto el Gobierno por parte de los elementos tradicionales integristas del catolicismo internacional moderno; esa actuación ha sido invalidada por un acto expreso del Pontificado. Nosotros no queríamos que la Iglesia española, en sus relaciones con el Estado, nos tratara como a un país congolés, sin atribuciones de Poder, y con lo realizado es la primera vez que a la nación se le da una satisfacción plena.

El segundo aspecto es hacer que a aquella organización política que toma por bandera determinadas interpretaciones de lo que es el catolicismo, inspirándose en una tradición política más que evangélica, y debe significar inequívocamente el deber de *rectificar su conducta*, puesto que no hay dudas respecto a cual ha sido la significación de los actos del Gobierno y la significación de los realizados por el ex arzobispo Segura.

No creo necesario decir más. Esto indica que los documentos que tenía en su poder el Gobierno han podido argüir como demostración de lo razonable de su conducta, de una seriedad tan plena, que ante ella se amilana el propio Papado. Sólo diré que tenemos que expresar el deseo de que las orientaciones de los católicos belgas y yanquis sean las que aquí se mantengan.

Por el Código canónico podía el Pontífice haber nombrado un administrador apostólico; pero ha renunciado a ello, y hoy mismo el deán de Toledo ha recibido los poderes del nuncio para que convoque al Cabildo con objeto de nombrar vicario capitular.

Un periodista preguntó al señor De los Ríos si el Gobierno haría uso de su derecho de presentación de candidato.

- ¡Ah! -contestó-. Eso es otra cosa. Nosotros por ahora no intervendremos en nada. El problema de las relaciones entre el Estado y la Iglesia lo entregamos íntegramente al Parlamento, y éste es el que habrá de decidir para lo futuro.

Cuando terminó sus declaraciones el ministro de Justicia, que el jefe del Gobierno había escuchado con interés y asentimiento, intervino nuevamente para decir:

- Yo creo que el Gobierno, en sus medidas unilaterales y en sus medidas diplomáticas, ha tenido razón, y por ello ha acompañado el éxito.

Con respecto a la situación del cardenal Segura, dijo el Sr. Alcalá Zamora que desde este momento nada tiene que ver con la Iglesia española y será tan sólo un miembro del Sacro Colegio.

Y el ministro de Justicia agregó:

- Estas negociaciones han sido largas y laboriosas, pero correctas y cordiales en todo momento, y han sido laboriosas y de larga duración porque en Roma se ha hecho profunda campaña por dos tendencias de la Iglesia española, sobre cuál ha de ser su orientación. El integrista ha sido vencido en esta lucha por un sentido más liberal de la Iglesia. Todos los partidos han dado en Roma sus orientaciones, y nosotros nos hemos limitado a esperar, ya que no existía ningún argumento contra nuestra razón.

Por su parte, el presidente habló otra vez y dijo:

- Y vean ustedes cómo este Gobierno, y en él cada ministro con la plenitud de su significación política, ha llegado a un acuerdo.

Terminó la interesante conversación entre los Sres. Alcalá Zamora y De los Ríos con los periodistas diciendo este último:

- Nosotros somos respetuosos con todas las opiniones y creencias; pero éste era un caso de irrespetuosidad ante el respeto.

"Mano de hierro en guante de seda"

El subsecretario de Estado comentando con los periodistas las negociaciones que han dado como resultado la dimisión del cardenal Segura, manifestó que por su situación había seguido muy de cerca tales negociaciones y que había podido admirar la entereza, y al mismo tiempo la cortesía del Gobierno.

- Hay que tener en cuenta -añadió- que al éxito han contribuido la cooperación diplomática del nuncio y el Gobierno con su exquisito tacto, lo que puede reflejarse en la frase diplomática de "mano de hierro en guante de seda".

33. - 11 de julio de 1931. Carta del cardenal Segura a "El Siglo Futuro".

Iglesia i Estat durant la segona República espanyola. III pàg. 338.

Señor Director de «El Siglo Futuro».

Muy estimado en el Señor: En esta tranquila soledad a la que el Señor en su adorable Providencia me ha traído, sigo muy de cerca los acontecimientos de la Patria en los tiempos difíciles que atravesamos.

Desde que Dios quiso o permitió que se me retirara del campo de combate, no me quedan otras armas que las de la oración y las del sacrificio, y esas las utilizo sin cesar con la esperanza firmísima puesta en la gran misericordia del Corazón Santísimo de Jesús, por cuyo reinado individual, familiar, social y político luchan tan denodadamente esos puñados de buenos, que no dudan en arriesgarlo todo por la defensa de los imprescriptibles derechos de Dios y de su Santa Iglesia.

En esa lucha se distingue por su valor y santa intrepidez la escogida falange de los escritores de «El Siglo Futuro», que, venciendo tantas dificultades, ha querido el Señor conservar para que en estos momentos tan angustiosos sirvieran de guía y de aliento a los que pelean.

No he ocultado nunca mi preferencia por ese valiente periódico católico, cuya docilidad a la Santa Iglesia he comprobado de un modo indubitable tantas veces durante mi ministerio pastoral. Sigo desde el destierro mirándole con singular predilección, y pido incesantemente al Señor inspiración para su Director y escritores, unida a una estricta fidelidad y santa fortaleza, tan necesaria en estos tiempos de tantas defecciones y cobardías.

Bien quisiera poder ayudarles más eficazmente en lo temporal; mas quiero que al menos tengan todos los años el testimonio de mi buena voluntad, y así seguiré enviándole, si me es posible, la misma cantidad que le acompaño en el adjunto cheque. No dudo que encontraré apoyo hasta el sacrificio en las muchas almas sinceramente buenas que conozco y que suspiran por el advenimiento del reinado del Sagrado Corazón de Jesús en España.

Para usted, mi querido señor Director; para todos los redactores y colaboradores, y para todos los suscriptores y lectores, envío una muy efusiva bendición.

† Pedro, Cardenal Segura y Sáenz

34.- "Una información sobre la provisión de la sede de Toledo".

"El Sol" 25 de agosto de 1931.

BARCELONA 24 (5,30 t.).- "Diario de Tarragona" publica la siguiente información:

"La Prensa ha hecho circular estos días las más confusas versiones sobre el viaje aéreo del cardenal arzobispo a Roma para entrevistarse con el Pontífice. La curiosidad periodística obligaba a buscar, a dar con alguna causa más concreta, más detallada y más documental que las versiones tímidas y neblinosas de ciertos periódicos, y por ello nos lanzamos a realizar esa investigación. He aquí el resultado obtenido:

Es un hecho real la deportación del cardenal Segura como sospechoso de monarquismo, y es otro hecho no menos categórico la decisión del Gobierno de no permitirle la vuelta a España si no es la Monarquía quien lo trae.

Otro factor decisivo en este asunto es que la sede toledana no puede permanecer vacante indefinidamente. El Pontífice desea que la vacante sea cubierta y que lo sea por persona por lo menos agradable al Gobierno, si no depositaria de su confianza. Y el mismo Pontífice no ignora que el único prelado español que se encuentra en estas condiciones es el cardenal Vidal y Barraquer, quien, al conocer el pensamiento del papa, se sintió altamente honrado por lo que el hecho tiene de significación moral y personal.

Todos conocemos el pleito viejo, planteado en forma correcta, existente entre las sedes toledana y tarraconense sobre la primacía eclesiástica. Ninguna de ambas ha querido ceder su derecho a la otra, y los dos prelados se han considerado siempre primados de España. Lo importante es que la primacía oficial la ostenta, tanto a los ojos del Estado como a los del Vaticano, la sede de Toledo. Ella sería la causa de que, por cuestiones de delicadeza, hubiese impedido aceptar al doctor Vidal y Barraquer la oferta del Pontífice, quien, por su parte no podía sentirse vencido por una cuestión tan ínfima frente a la trascendencia de su ministerio. Y apenas planteado el tema, se encontraba una solución de suma importancia para la sede tarraconense. La Santa Sede reconoce oficialmente la sede primada de Tarragona.

Un hecho: desde hace algún tiempo, muy poco, son dirigidos desde Roma a Tarragona documentos que eran antes enviados invariablemente a Toledo, en razón de la primacía de esta última sede. Así el cardenal Vidal y Barraquer pasa a ser cardenal arzobispo de Toledo. Pero...

A pesar de que la determinación vaticana que obedecía a necesidades imperiosas, pudo creerse que obtendría buena acogida, ciertos elementos se

apresuraron a manifestar su disconformidad. Todo esto ha hecho prever que la justa determinación del Papa no sería acatada por cierto sector de fieles, y he aquí un curioso conflicto, sin precedentes en la historia del catolicismo español.

¿Cómo se resolverá finalmente? ¿Volverá la cuestión a los términos en que estaba planteada antes del viaje del cardenal a Roma? ¿O la Santa Sede hará uso de sus facultades supremas para imponer a los rebeldes el deber de la santa obediencia y de... la discreción?

Recuerde el lector que "la realidad de las cosas" dice que a la sede de Tarragona "llegan documentos vaticanos dirigidos al cardenal primado de España". (Febus).

35. — 1 de noviembre de 1931. Circular num. 36. Cumplimiento de la precedente Encíclica.

BOE de Costa, año 66, 15 de noviembre de 1931, num. 22, págs. 345-350.

Después de escuchar, amadísimos Hijos, las palabras del Papa, tan llenas de paternal ternura para todos, pero especialmente para los niños, para los pobres y para los obreros, sería en nosotros un atrevimiento y una profanación el añadir cualquier comentario.

Pero es el mismo Romano Pontífice quien nos manda que de palabra y por escrito expliquemos su pensamiento a todos nuestros diocesanos; y ante su requerimiento no nos es lícito callar. Tanto más, cuanto que la necesidad misma de tantos pobrecitos nos aguijonea para que no perdonemos medio alguno en orden a aliviar tanta miseria.

¿Cómo no sentir el corazón desgarrado al ver contritos por el dolor y el hambre esos rostros infantiles que a todas horas debieran dejar oír el cascabeleo de sus risas ingenuas, sin conocer jamás otra preocupación que la de sus juegos inocentes? ¿Cómo no prestarse a cualquier sacrificio con tal de conseguir que jueguen alegres y rían satisfechos? ¡Ah! no sería tan frecuente y tan lastimero aquel espectáculo, si la dureza y el frío del oro no hubiera insensibilizado a tal extremo el corazón de aquellos ricos, que, olvidándose de la estrechísima cuenta que han de dar muy pronto a Dios de la administración ovariada de sus riquezas, sólo piensan en acrecentarla hasta un límite monstruoso; en satisfacer sus vanidades, sus gustos y caprichos, como si para ellos solos hubiera Dios hecho la tierra fecunda, benéfica la lluvia y cariciador el sol. El solo pensamiento de que hubiera en el mundo algún pobre niño, quietiendo un padre honrado y trabajador, sintiera sus entrañas atenazadas por el hambre, debiera bastar a esos ricos para amargar los más exquisitos manjares y mutarles los cielos más divinos.

No creo que existan en nuestra diócesis corazones así deformados por la ambición y por el olvido de la caridad de Cristo. Aunque haya, como necesariamente tiene que haber en todas partes, conforme a la palabra infalible de Cristo, pobres y ricos; pero es entre nosotros desconocido el tipo del millonario que realiza negocios fabulosos con especulaciones bancarias y comerciales, sin reparar en la ruina de sus compendores, ni en la injusticia de sus métodos de explotación.

Es más bien esa desigualdad, fruto acumulado de herencias legítimas, de industria ingeniosa y de trabajo leudado y afortunado; aunque también acaso—¿por qué ocultarlo ni negarlo?—de la poco equitativa distribución en las ganancias, que lamentaba Pío XI en su Encíclica QUADRAGESIMO ANNO.

Que no es justo ni razonable adjudicar al capital, al talento director, al dominio del instrumental, sobre todo cuando no hay riesgos apreciables, una inmensa parte de la ganancia, y dejar en cambio al trabajo manual sólo una pequeñísima parte. No es cristiano que unos pocos monopolicen el disfrute de todas las

ventajas, y una inmensa muchedumbre, muy semejante a los esclavos, se vea sistemáticamente imposibilitada de elevar su situación económica, no sólo no pudiendo aspirar a un mínimo de bienestar, sino ni aun siquiera a satisfacer sus necesidades más elementales.

Por eso el primer remedio que debe ponerse a la crisis económica, es la distribución más justa de las ganancias, dando al obrero tales jornales que basten, no sólo a satisfacer sus personales necesidades económicas presentes y las de su familia, sino a prevenirse con un pródigo ahorro para un futuro de dolorosas contingencias. Claro que esto supone en el rico que no mantenga baldías sus posesiones, sino que las explore con prudentes arriesgos. Mas por lo mismo supone en el obrero una obligada fidelidad en la prestación de su trabajo: porque no es conveniente al patrono ni al obrero que los ingresos se vean volutamente mermados; ni es posible que trabajando poco y mal pueda una explotación cualquiera rendir ganancias bastantes para repartir en abundancia; ni es justo que las escasas ganancias obtenidas por un trabajo deficiente vayan todas a recompensar la mano de obra con ruina segura para el capital. Lo útil lo justo, lo razonable es que el obrero trabaje bien y que se le retribuya. Que el trabajo y el capital, en vez de luchar como enemigos se abrazen y ayuden como hermanos. Así el bienestar, la paz y la abundancia favorecerán por igual al patrono y al obrero, sin perjuicio para unos ni para otros. De lo contrario, si el obrero reclama para sí más ganancia de la que produce, inevitablemente el patrono habrá de abandonar con razón la empresa, y el perjuicio será común para todos, sí, pero mucho más sensible para el pobre que, teniendo menos medios de resistencia, sucumbirá más pronto.

A este remedio debe seguir o acompañar el uso recto de las ganancias así en los pobres como en los ricos. Porque un jornalero, por copioso que sea su salario, no gozará nunca de completo bienestar, si en vez de mantenerse dentro de la moderación debida, se lanza a disfrutar locamente de cuantos goces y pesatiempos le presentan los explotadores de su pobreza; ni tendrá paz en el hogar, si el juego le empobrece y el vicio y la impiedad secan en su corazón las fuentes del cariño familiar y de la piedad cristiana. No son las riquezas la única finalidad del hombre sobre la tierra, como predicán tantos voceros de la impiedad materialista, sino la práctica de la virtud para conseguir el cielo. Ni es verdad que las riquezas ahuyentan todas las desgracias; antes al contrario, las atraen lo mismo en el orden físico que en el moral que en el social.

Y un rico, por muchos teatros que frecuente, por muchas ciudades que visite, por muchos millones que despilfarre, no hallará jamás el gusto de una vida satisfecha, ni la paz y el sosiego de una conciencia tranquila.

Con esa caridad y esa moderación, o no surgiría la crisis económica o una vez producida, no tardaría más tiempo en desaparecer que el indispensable para ponerse en contacto. Como el nivel de dos depósitos inmediatos de agua no se verá más

tiempo en igualarse que el necesario para ir pasando el fuego de uno a otro, una vez que se haya establecido la comunicación.

Que *pagueen*, pues, los ricos muchos y buenos jornales, con que los obreros puedan no sólo acallar el hambre de su casa, sino defenderse de los rigores del tiempo y prevenirse para las acometidas de la enfermedad y de la vejez; pero que los obreros por su parte *ganeen* también esos jornales con un trabajo fiel y a conciencia. No se vea jamás en el obrero la idea de perjudicar deliberadamente a su patrono, restándole a su trabajo tiempo, intensidad o eficacia; ni mucho menos esas aviesas intenciones que se dicen realizadas en algunas partes, de destruir o desplazar abundantemente árboles, cosechas, animales o fincas, sin provecho alguno para nadie y con perjuicios incalculables para todos, puesto que ni la vid destrozada dará racimos para el obrero, ni la oveja muerta le dará leche, ni la casa incendiada, albergue.

Los que tal hagan, nada tienen ciertamente de cristianos en su corazón; son completamente paganos, que desconocen el primero y más grande de los preceptos de Jesucristo, que es: «Amaos los unos a los otros».

De aquí surge, amadísimos hijos, la necesidad de otro remedio, sin el cual, poca o ninguna esperanza podemos abrigar en los restantes. Es necesario cristianizar más y más al obrero; es necesario que no lea la prensa anticristiana, destructora de toda idea de caridad e impulsora de todos los odios; es necesario que lea la prensa buena, las lecturas educadoras y sanas; es necesario que vuelva a su Religión, oyendo misa y descansando los días festivos; ¡Cuántos patronos tendrán sobre sus conciencias el peso de muchas de esas infracciones que han cometido sus obreros! Es necesario que se aparte de mudas, y de centros y de diversiones que le trastornan su corazón y su cabeza, para que sano de alma y de cuerpo trabaje con alegría y con fruto, y sólo ambicione la felicidad cristiana de su hogar.

Para esto los ricos deben favorecer copiosamente las publicaciones católicas, recomendando su prosperidad y su lectura, seguro de que con ello levantan un baluarte inexpugnable en defensa de su bienestar y de la paz. Es preciso que de palabra y por escrito se difundan el conocimiento y la práctica de la Encíclica QUADRAGESIMO ANNO con todas sus admirables y fecundas enseñanzas; y no tardarán en palpase sus benéficos resultados.

Pero como aún empezando hoy mismo esa propaganda, que ha de formar la conciencia cristiana del obrero sus efectos han de verse solamente después de algún tiempo—por la misma razón que el levantar una casa con sus cimientos, paredes, tejambre, puertas, ventanas, muebles y pinturas, lleva siempre mucho más tiempo que el preciso para destruirla con un incendio o una bomba explosiva—urge que respondamos ahora mismo, para este mismo invierno, con medidas inmediatas al ha-

namiento Pontificio. Que el hambre no sufra un fracaso, que es infinitamente malísima conciencia.

Todos aquellos que pueden emplear obreros en empresas útiles y remuneradoras, hagámosle sin tardanza, que vale más, incomparablemente más ese modo cristiano de ejercitar la caridad hermanándola con la justicia y el provecho, que el sistema de limosnas y socorros puramente gratuitos, que tantan por una parte los engaños y la ociosidad y la frivolidad, y dejan por otra desahendadas las obras y cultivos que en día no lejano devolverían generosamente multiplicado el fruto del trabajo presente.

Si no obstante hubiera todavía en algunos puntos obreros, niñas o pobres necesitados, que corran abundantemente las limosnas organizadas de los ricos, no dando solamente algunas mirajas de lo que sobra, sino todo cuanto huele a capricho, lujo, o vanidad y aun cercenando todo aquello que no sea estrictamente indispensable; pues mientras haya quien sufra las desgarraduras del hambre, ningún cristiano debe malgastarse un centimo, si quiere tener derecho al título de hijo de Dios.

El Papa, como habéis visto en su Encíclica, quiere que el Obispo sea el centro a donde afluyan esas limosnas y donde se repartan a los indigentes. No rehusaremos la labor, por impropia que resulte, con tal de aprovechar con el mayor efecto posible hasta los más insignificantes donativos. Pero como nos autoriza también para servirnos de aquellas instituciones de experimentada eficacia en que tengamos confianza plena; queremos desde luego que la Junta de la Cantina Escolar de Cuéres que viene funcionando desde hace años con tan exquisita caridad y reconocido éxito, sea para dicha Ciudad el centro donde se recojan limosnas y se repartan los socorros a los niños pobres.

En las parroquias donde están funcionando las Conferencias de San Vicente de Paul, a ellas confiamos la colecta y distribución; y donde no existan, se encargarán los Párrocos con una Junta reducida de las personas más piadosas.

Cuando haya hambre por razón del paro forzoso en los mismos pueblos, las entidades referidas procurarán distribuir comidas económicas ya aderezadas o raciones en especie para ellas, tan sólo vez socorros en metálico, para evitar con seguridad el abuso posible de que pueda emplearse en bebidas lo que se da para el sustento necesario.

Las parroquias que tengan la dicha de no sentir ese azote, no por eso descuidarán recoger limosnas cuantas puedan; antes mostrarán a Dios su gratitud, siendo más esplotados en los días malos, y procurarán enviarlos a nuestra Secretaría de Cámara, para que podamos atender a las necesidades más apremiantes de otras parroquias más miserables.

Todos hemos de morir en esta cruzada de amor y de sacrificios, para enlugar todas las lágrimas, enseñar a todos los corazones y vencer esta crisis con que el egoísmo de los hombres ha transformado la economía caritosa de Dios. Todos hemos de repetir las palabras dictadas por Jesucristo: «Él pon maestro de cada día, ¡hoy es hoy!». Pero no olvidemos que el remedio no debe ser pasajero; que debemos reconstruir la sociedad sobre cimientos más sólidos que el egoísmo, la riqueza y las pasiones; que es necesario hacer llegar a todas las inteligencias las enseñanzas pontificias sobre el capital y el trabajo, sobre el matrimonio y la familia, sobre la educación y la Acción Católica. Que

todo esto no es obra de un día ni de una persona, ni de una parroquia, sino que será el fruto de la colaboración constante de sacerdotes y fieles, de padres e hijos, de patronos y obreros, de ricos y pobres, de hombres y mujeres. Todos somos miembros de una sociedad perfecta, la cual no puede gloriarse de una vida vigorosa, mientras parezcan atolados algunos de sus miembros.

Trabajemos, pues, cada cual en su puesto, y Dios nos dará ver una patria feliz y tranquila, donde se le sirva con una libertad santa, un corazón puro, una conciencia recta y una fe no fingida.

Así lo desea y pide para todos vosotros vuestro Prelado que de todo corazón os bendice en el nombre \dagger del Padre y del \dagger Hijo y de Espíritu \dagger Santo. Amén.

Coria, 1.^o de noviembre de 1931, fiesta de Todos los Santos.

Dionisio, Obispo de Cuzco.

36.- Carta de Leopoldo Eijo y Garay, obispo de Madrid-Alcalá, al cardenal Vidal y Barraquer.

26 de diciembre de 1931. *Església i Estat durant la segona República espanyola*, II, págs. 457-459.

Confidencial

EL OBISPO DE MADRID-ALCALÁ

Madrid, 26 de diciembre de 1931.

Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Tarragona.

Venerado Sr. Cardenal y querido amigo: Recibí su carta del 14, y tuve la entrevista con el P. Gafo. Me explicó el alcance de la alusión que en su carta hacía a las dificultades con que ha tropezado la gestión de unión de los obreros católicos, con miras a formar un frente dilatado y una organización obrera de derechas, que no lleve en su título el nombre de católica. Parece que, cuando todo se presentaba bien, la intervención del P. Nevares y del P. Chabaud, aquel en el Sindicato ferroviario de Valladolid y éste en los obreros de Bilbao, lo paralizó todo, porque no podían consentir, sin orden de la Iglesia, que se suprimiera aquella expresión de la confesionalidad religiosa. Con motivo de esto, volvimos a tratar la cuestión de fondo del asunto.

Ya que V. Em. me dice que le manifieste yo a V. Em. mi parecer, le diré lo que pienso, aunque sometiéndolo todo al superior criterio de V. Em.

Me parece indudable que hay que procurar la formación de una masa obrera organizada que, sin renunciar a la defensa de sus intereses profesionales, sea de orden, enemiga de las violencias, que suelen llamar «acción directa», y de la esclavitud sectaria a la Casa del Pueblo. La ocasión nunca la encontraremos mejor que ahora, pues el Gobierno que venga cuando cese la dictadura socialista que padecemos, necesitará de esa organización para dar la batalla a la Casa del Pueblo; los odios que ésta se ha concitado son muy grandes; la lucha contra ella es inminente, y debemos procurar que sea eficaz. Si no se dispone de aquella gran organización, buscará el Gobierno apoyo en el Único, y será tan malo el remedio como la enfermedad. Las circunstancias son ahora propicias, pues la masa obrera ni quiere a la Casa del Pueblo, ni al Único. El núcleo que con todos los afiliados a nuestros sindicatos se formara, se nutriría rápidamente, y sería el fermento de la nueva organización.

¿Es todo esto un sueño? No lo creo; pero, aunque lo fuese, no hay otro camino a la vista, ni es cosa de abandonar totalmente el campo obrero, ni de seguir en la misera y estéril actuación.

Pero es claro que, conservando el título de católica la organización deseada no acapararía obreros en la cantidad necesaria. No hay que insistir en esto, porque es cosa fácil de comprender.

Me humilde parecer, pues, es que nuestros viejos Sindicatos Obreros Católicos deben unirse con los que se llamaron Sindicatos Libres, y todos unidos deben crear los nuevos Sindicatos Profesionales, sin más apelativos, o sólo con el de Independientes; y éstos serían los núcleos que crecerían con la adhesión de la masa obrera que quiere estar asociada, pero no en el Único ni en la Casa del Pueblo.

Supone esto la clausura de nuestros actuales Sindicatos? De ninguna manera. Opino que la nueva Asociación no debe instalarse en nuestros antiguos locales; de lo contrario, se esterilizaría su eficacia. Pero no por eso estarían de más nuestros Centros actuales: deberían llamarse «círculos de Obreros Católicos», y consagrar su actividad a educar a los obreros en la doctrina social católica, a avivar su fe religiosa y su formación social, etc., etc.; para decirlo todo con un símil, en los «círculos de Obreros Católicos» nuestros obreros se cargarían de la electricidad que habrían de llevar al Sindicato Profesional, para irradiarla en torno suyo, y ser así el fermento de la nueva masa organizada.

Así, ni la actuación política (ni las huelgas, ni las reivindicaciones que realizase el Sindicato Profesional) sería imputable a la Iglesia; ni el temor de esto ataría, como tantas veces ha ocurrido, a los Sindicatos Católicos; ni estos necesitarían, una vez en auge, de nuestra protección pecuniaria, siempre escasa; ni tendrían que languidecer como ahora.

Tampoco podríamos nosotros desatender esa labor, sino que nos habría de preocupar más vivamente, y nos alentaría el resultado de la maniobra con masa poderosa — protegida, como fatalmente lo habrá de estar, por el Gobierno que suceda al actual, y tal vez muy pronto —; nuestros apóstoles sociales actuarían franca y directamente en los «Círculos de Obreros Católicos», y, por medio de los obreros bien formados en ellos, en el Sindicato Profesional. En las localidades pequeñas, donde no pudiese formarse un «Círculo de Obreros Católicos», tendríamos una célula de varios obreros escogidos que, en comunicación segura con el Centro correspondiente, sirviese de enlace y elemento activo.

Así veo yo la acción hoy día, y creo que todo lo que no sea esto es perder el tiempo.

Esto encaja perfectamente con las Normas Pontificias dadas para toda la Iglesia, y de hecho practicadas en naciones que, si no son tan católicas como la nuestra (porque hay muchos, acaso la mayoría, de otras creencias), en cambio no están, como estamos nosotros, en período de persecución enconada contra todo lo que sea católico; aparte de que el descrédito de nuestros Sindicatos actuales es tan grande y universal, que ninguna masa obrera considerable entraría en ellos por mucho que hiciéramos.

Urge esto, además, en caso de hacerlo. La masa obrera que se necesita, surgirá ineludiblemente, pues la necesitará el Gobierno para dar la batalla a la Casa del Pueblo. Si no la formamos nosotros, se formará ajena a nosotros, y tal vez enemiga.

¿Medio práctico? Hoy por hoy, bastaría dotar al P. Gafo de documento autorizado, que él pudiera mostrar a los nuestros que — convencidos o no, como yo lo estoy, de las nuevas necesidades — no se atreven, por respeto a lo anteriormente dispuesto, a suprimir el título de «Católicos», para que rompiesen los viejos moldes y se vaciasen en el nuevo. Conviene que no sea público ese documento, porque, de publicarse mucho nuestra idea, perdería su eficacia; pero sí debe ser claro, terminante y apremiante, para que rinda la necesaria utilidad.

Ahora, V. Em. dirá, y lo que diga aceptaré con entera obediencia y fidelidad [...].

Y nada más por hoy, Sr. Cardenal. Que tenga muy felices Pascuas y venturoso Año Nuevo, y ordene y mande a su afmo. amigo y menor Hermano que besa su sagrada púrpura

El Obispo de Madrid-Alcalá

36.1.- Notas para la organización profesional de los obreros católicos.

S.f., *Església i Estat durant la segona República espanyola*, II, pàgs. 460-462.

Quizás podrían ser útiles entre otras las siguientes:

I. RESPECTO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL CATÓLICO-OBRAERA.

1.° Parece más conveniente no destruirla, antes bien vivificarla y mejorarla lo más posible, tanto desde el punto de vista obrero, como desde el punto de vista confesional.

2.° Debiera publicar un manifiesto, separándose, muy a su pesar, de la Acción Católica, en virtud de las actuales circunstancias, y prescindiendo, oficial y estatutariamente, del Consiliario. (Este podría y debería, sin embargo, continuar privadamente en contacto con los Sindicatos, para dar su consejo siempre que lo estimare conveniente, y para infiltrar lo más posible en los mismos el espíritu social católico.)

3.° En el mismo manifiesto debería reafirmar, ahora con más fervor que nunca, su catolicismo y su inquebrantable adhesión a la doctrina social católica y a las orientaciones pontificias.

4.° Item, depurar e intensificar su espíritu profesional, declarándose absolutamente independiente de toda influencia patronal.

5.° Item, hacer pública y enérgica declaración de ser esencialmente apolítico, aunque acate y respete, como es debido, el régimen vigente y toda autoridad legítimamente constituida. (Para que no se le tache de monárquico.)

6.° Item, publicar un programa social para su futura actuación.

7.° Debiera obligar a todos sus socios a que en adelante pertenecieran a una entidad cultural, que podría, v.c., denominarse Cultura Integral Popular (C.I.P.), en la que no debieran satisfacer cuota alguna.

8.° Esta entidad debiera pertenecer a la Acción Católica, y tener por fin la formación integral del obrero católico, preferentemente la formación religiosa, moral y católic-social. Debiera tener oficial y estatutariamente su Consiliario, nombrado por la Autoridad eclesiástica, y sería, en particular, de su incumbencia la formación de círculos de estudios sociales y religiosos, y procurar la formación de propagandistas obreros. En esta entidad cultural podrían actuar jóvenes y caballeros pertenecientes a sus respectivas asociaciones de Acción Católica, pero siempre bajo el consejo y dirección del Consiliario que la citada entidad cultural tuviera.

II. CONFEDERACIÓN OBRERA PROFESIONAL

1.° Sería una organización puramente profesional, sin nombre de católica, pero siguiendo de hecho y estatutariamente la doctrina social católica, que quizás podría indicarse con las palabras «Doctrina del Código Social de Malinas», o de «La Internacional de Utrecht».

2.° Debiera ser una organización paralela y complementaria de la anterior, y de ninguna manera opuesta en lo más mínimo a ella, ni en las palabras públicas o privadas, ni en los procedimientos. Más aún, interiormente debiera estar íntimamente y muy amistosamente relacionada con ella, para ayudarse lo más posible, y complementarse la una a la otra.

3.° Debiera ser esencialmente apolítica de hecho y de derecho.

4.° Nunca debiera hacer profesión pública ni privada de aconfesionalidad en ningún sentido. Pues debiera ser una institución puramente profesional y no positivamente aconfesional; y, aunque no estatutariamente ni oficialmente, pero sí debe ser, de hecho y por su espíritu, doctrina y procedimientos, positivamente católica.

5.° Debiera declararse oficialmente partidaria de los procedimientos legales, y enemiga acérrima de todo procedimiento de violencia.

6.° Sería muy conveniente que obligara moralmente a todos sus socios a formar parte de la entidad C. I. P. (Cultura Integral Popular), en la cual debería haber secciones acomodadas a la mejor o peor disposición intelectual y anímica de los obreros.

Nota Bene. Los inconvenientes, mas tal vez aparentes que reales, de la coexistencia de estas dos asociaciones, pueden ser superados por las ventajas que de ella se sigan. En el espíritu, y de hecho, debieran ser ambas una sola organización, con dos facetas: una con tendencia a cultivar la «élite», y la otra con miras a conquistar la masa, pero no admitiendo ni reteniendo en su seno a los que laboraren en contra de los fines y doctrinas o programas de la asociación. La C. I. P. (Cultura Integral Popular), sería el lazo de unión de ambas entre sí y de ambas con la Acción Católica.

III. SECRETARIADO OBRERO CATÓLICO (S. O. C.)

1.º Convendría constituir en Madrid (con Delegaciones regionales cuando fuera oportuno) y en el seno mismo de la Acción Católica, un Secretariado obrero que tuviera por fin: a) aunar los esfuerzos e intentos de todas las asociaciones (locales de la C. I. P. (Cultura Integral Popular); b) intensificar la unión indirecta de las organizaciones obreras con la Acción Católica; c) infiltrar lo más posible el espíritu cristiano en las mismas por medio de la C. I. P., y velar por la actuación de esta última; d) organizar cursos intensivos para los obreros, preparar los programas de los Círculos de Estudios, responder a las consultas doctrinales o legales; organizar viajes culturales obreros, convocar a asambleas de la C. I. P. y de sus consiliarios o dirigentes, girar visitas de inspección a las C. I. P. y fomentar lo más posible la constitución de Pías Uniones Profesionales.

Nota. Lo que hace, según este presente proyecto, la C. I. P. respecto a la preparación y formación sindical del Obrero para ingresar o actuar provechosamente en una u otra de las dos organizaciones antes dichas, esto mismo debe hacer la Pía Unión Profesional, donde fuere posible y oportuno crearla, respecto a la preparación y formación religiosa-profesional del obrero que se prepara para ingresar o actuar ya en aquellas mismas organizaciones. Estas Pías Uniones Profesionales podrían crearse dentro o fuera de la C. I. P., o en sustitución de la misma C. I. P., según aconsejaren las circunstancias. Donde ya existieran Congregaciones Marianas Obreras o bien otras entidades piadosas parecidas a ellas, debiera, a ser posible, orientarse a sus miembros hacia el espíritu y formación católica profesional.

Quando las circunstancias lo exigieren, a juicio de los Prelados, la C. I. P., tendría, v. c., Círculos de Estudios en que no apareciera personalmente el Consiliario; pero entonces el Director o Presidente del Círculo debiera pertenecer a la Acción Católica, y ser nombrado, dirigido y depuesto, en caso de necesidad, por el Consiliario de la C. I. P. respectiva.

IV. JUVENTUD OBRERA CATÓLICA

1.º Debería ponerse un especialísimo empeño en la formación y cultivo de esta juventud, adherida a la Acción Católica, con sus Consiliarios, Círculos de Estudios, etc., y siempre con la finalidad específica de preparar a sus miembros para ser elementos provechosos, el día de mañana, de cualquiera de las dos organizaciones que libremente escogieren: la Confederación Nacional Católica, o la Confederación Obrera Profesional.

2.º Debiera orientarse a los niños de las escuelas católicas y de las Catequesis hacia esta juventud, por medio de los buenos maestros y de los catequistas.

Nota Bene. Parece necesario que cada una de estas tres organizaciones obreras — la Confederación Nacional, la Confederación Obrera Patronal y la Juventud Obrera Católica — tuvieran sus respectivas publicaciones, por modestas que ellas fueran, a lo menos al principio.

Item. No parece posible que las organizaciones católicas puedan desarrollarse e influir eficazmente sin que haya un partido político obrero derechista, pero a condición de que, dentro de las organizaciones profesionales derechistas, no se entrometa el espíritu político.

V. SECRETARIADO DE INTERESES PATRONALES

1.º Debiera ponerse en contacto con los patronos católicos, o no hostiles al catolicismo.

2.º Fomentar y facilitar la fundación de organizaciones patronales católicas, de hecho y de derecho, pero sin nombre de tales o con él según los casos; sin consiliario oficial o estatutario, pero con espíritu y doctrina católica de hecho y de derecho.

3.º Ponerse en relación con el Secretariado Obrero Católico.

4.º Procurar que los patronos católicos y el público en general dé preferentemente trabajo a los obreros de las dos organizaciones obreras derechistas mencionadas.

5.º Debiera pertenecer a la Acción Católica y tener su consiliario, infiltrar el espíritu cristiano en los patronos y preparar a los patronos futuros.

37. - 26 de abril de 1931. Circular núm. 94. Ad clerum sive saecularem sive regularem circa usum vestis talaris.

625 de Madrid-Alcala, año 46, 1 de mayo de 1931, núm. 1534, págs. 176-177.

Quindecim abhinc diebus, quando inusitatae commotiones populares adventum novi Regiminis celebrarunt, multi fuere clerici, sive saeculares, sive regulares, qui, deposito habitu talari, ad laicalem confugerunt. Quod sane potuit in uno alterove casu laudabilis esse prudentiae, nequaquam vero in aliis plurimis, prout rerum eventus compertum est; siquidem benemeriti sacerdotes, qui, de more, habitu talari incesserunt, molestiarum quidquam haud fuerunt experti.

Illud autem est quod et grave aestimamus et Nos urget has vobis dare litteras: elapsis videlicet illis popularis et feliciter pacificae commotionis diebus, plures adhuc pergere sacerdotes laicali habitu per Matritenses vias incedere. Qui usus revera nulla hodie causa fuleiri potest, ideoque gravem constituit transgressionem Canonis 136. Si temporum adjuncta periculosiora evadent, non poterit quin haec ab omnibus tempestive notentur, et tunc fas erit timidis, alicui malo vitando, sacerdotalem statum extra domos suas celare. Attamen rebus ut nunc stantibus id non licet, obligatio enim contemnitur et scandalum fidelibus generatur, quorum jam multi dicunt non adeo prudentia et timore laicalem habitum clericis inspirari quam desiderio morum illis liberiorum quos talaris habitus consentit.

Quapropter omnes vos exhortamur abstineatis a veste laicali; admonemus vos transgressoribus applicabilem credi a Nobis Canonem 2379; nullam etenim gravem eos excusantem invenimus causam. Quoad sacerdotes regulares, prudens fortasse crederemus eos e domo non exire habitu Ordinis sui si habitus aut forma aut coloribus attentionem excitat; monitos tamen illos volumus ipsis laicali habitu incedere nequaquam licere, sed eos saltem insartum sacerdotum saecularium vestiri debere.

Haec de hisce tantum diebus, ut liquet, dicta sunt; si vero, quod Deus avertat, alii dies advenerint commotionis et publicae agitationis anticatholico characterе signati, tunc poterunt qui rationabili de causa sibi periculum imminere crediderint, vestes laicales adhibere.

Inpraesentiarum vero nequaquam id licet, omnesque tenentur praescripto Canonis 136, paragr. 1, sub poenis Canonis 2379, cujus sane applicatio maximo Nobis esset dolori,

Matriti, die 26 aprilis, 1931.—† LEOPOLDUS, *Epis. Matriten-Compluten.*

38. — "Pastoralia Monita ad Venerabilem clerum saecularem
utrisque Dioecesis, temporum circumstantiis
accommodata."

23 de julio de 1931. *BOE de Tarazona y Tudela*, año 63, 31 de julio de 1931, núm. 688,
págs. 555-567.

Dilectissimis fratribus salutem in Domino.

Jam pridem árdenter cupiebamus sermonem ad vos habere, admodum dilecti sacerdotes, quin hucusque Nobis facultatem sinerent et copiam labores plurimi et angores quos temporum malitia adjunxit assueto oneri ministerii Nostri.

Etenim, expleta jam, postremo mense Octobri, sacra utriusque Dioeceseos Visitatione, usque omnibus cognitis, pro modulo nostro, quae ad dilectissimas Nobis concreditas Ecclesias spectant, — personae, res, ministeria, traditiones, vita, nempe, religiosa populi Nobis commissi, — non cunctandum putavimus super celebratione Synodi dioeceseanae qua, conlatis omnium laboribus, res omnes ad illud perfectionis apicem ducerentur, quantum humana sint fragilitas, quo ad sacrorum canonum postulata omnino dispositae dici possent.

Ad hoc, oportuno tempore, prudentiorum requisivimus consilium, quod quam nostro cohaereret proposito ipsi gerunt qui vocati interfuerunt. Ad hoc amplam ex vobis omnibus informationem praeviam, ut ajunt, super omnibus in Synodo tractandis postulavimus, notulasque diligenter collegimus quas, pro solertia vestra et ingenii acutitudo, ad quaesita respondentes, Nobis missas fecistis. Vobis gratum Nostrum animum his Litteris pro zelo vestro ac diligentia libenter exhibemus.

Jamque prior conventus indictus fuerat, ut probe notis, ad diem decimam quintam Aprilis currentis anni, quo generalis Synodi Commissio Nobiscum ea omnia decerneret quae ad futuram Synodum fructuose celebrandam necessaria putarentur; immo et particulares commissiones huic Conventui interesse debebant ut suos sibi labores dividerent, cum ¡heu! res publicae ex templo adeo sunt immutatae, in ipso pervigilio conventus, ut prudentius et securius duxerimus sessionem illam praeviam suspensam habere atque ad alium diem differre, existimantes ipsam politicam agitationem et regiminis mutationem tortasse in futuras Synodi delibe-

tationes et resolutiones influxum habituras. Quod leges nuper a Gubernio latae et sanctae, aliaeque quae futuro tempore abs dubio erunt condendae, non incasum praevissum demonstrarunt.

Non ideo spem reliquimus quantocius Synodum celebrandi, quod, favente Deo, speramus fore proximioris anno, quamvis fortasse immutatae leges civiles, et quoad applicationem adhuc imprecisae, circa materias plus minusve ecclesiasticam jurisdictionem, immo et doctrinam, attingentes, Nos cogant aliqua particularia puncta vel questiones in synodali constitutionibus praeterire.

Haec quidem omnia vobis nota facere voluimus, carissimi fratres, ad spem vestram erigendam animumque excitandum ad meliora tempora exspectanda, utque omnes, ore uno et anima una, a Deo Patre postulemus, ejusque Filio Jesu Christo, a quo «omne donum perfectum» descendit (1), ut cessent jam pro Ecclesia tempora turbida redeatque serenum, quo ministeria omnium nostrum in pace, si Ipsi placet, adimplere queamus, ad animarum nobis commissarum profectum et sanctae Ecclesiae aedificationem.

Interim vero, dilectissimi sacerdotes, ut arctiori nexu, prout adversa tempora exigunt, mente, animo et corde mutuo jungamur, — vis enim unita fortior minusque, vicaria consolatione, adversae res junctos caritate tangunt — sinite hanc Pastoralem Adhortationem ad vos paterno, immo et plus fraterno corde dirigere, qua vestram figamus mentem et attentionem ad res illas quae magis Nobis opportunae videntur, ut incommoda vitare possimus quae abhinc mensibus tribus, a die, nempe, quo politicae res immutari caeperunt, experti sumus. His enim a vobis omnibus lectis et diligenter ad praxim deductis, speramus fore ut alia quae aliqui ex vobis Nobiscum passi estis non iterentur, alia vero et praevideri et praeveniri possint, ad pacis et spiritualis aedificationis bonum et tutamen, utque lux nostra splendorque Ecclesiae sanctae «luceat coram hominibus, et glorificent Patrem nostrum qui in caelis est» (2).

(1) Jac. 1, 17. — (2) Mt. 5, 16.

Ad has, praeterea, litteras redigendas, pro vestro Nostrisque profectus, invitant solitudo et pax, reapse monachales, quos in hoc fruimur Monasterio degentes, his aestivis diebus quibus Nos a rerum tumultu subtraximus, corporis et animi requiem et refectionem suscepimus.

3. — Et in primis, fratres, memores simus oportet supremam esse vitam nostrae et ministerii sacerdotalis legem immaculatos nos custodire ab hoc saeculo (1). Item, orantium jugiter oculi in nos intenti esse solent quidquid mali malive speciem induens inspecturi, nunc vero, cunctis his diebus, nil non moluntur perferri homines quominus nomen et famam nostram labefaciant, indignis laqueis, calumniis, venenum rerum exaggeratione ore et praeco, scriptis et imaginibus, praesertim his quae «*calumnias*» audiunt, quibus omnibus vel in facta vel in personas singulas sacras impingunt, vel integram hierarchiam ecclesiasticam, monasticas institutiones, vel tam religiosam sacrarum functiones pessumdare contendunt.

Nos igitur, venerabiles fratres, et vos ipsos urgere debemus ad integram vitam famamque servandam. Si quidem, tam Paulus Apostolus hanc tesseram sibi ipsi praeiiceret, ne sanctissimi Apostoli nomen apud gentes male Christianis diffamaretur: «*Evitantes hoc, aiebat, ne quis nos vituperet in hac plenitudine quae ministratur a nobis. Providemus enim bona, non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus*» (2).

Scimus utique, carissimi, non nos hominibus, sed Deo placere debere (3); Ipse enim «*intuetur cor*» (4), atque approbat vel reprobat conscientiam vitamque nostram, quoniam moveatur iudicis hominum, plerumque fal-

(1) Jac. 1, 27. — (2) Gal. 5, 26-27. — (3) Gal. 1, 10. — (4) Reg. 16, 7.

sis. Oportet, attamen, nedum bonos esse, sed et tales nos videri et haberi; nam ut Eugenium Pontificem monebat Sanctus Bernardus: «Interest tuae perfectioni et malas res et malas pariter species devitare: in altero conscientiae, in altero famae consulis: puto tibi non licere, etsi alias fortasse liceat, quidquid male fuerit coloratum. Denique, interroga majores nostros et dicent tibi: Ab omni specie mala abstinete vobis» (1). Praesertim cum ignobile vulgus malis facilius credat quam bonis, et plus noscat bona in malam deducere partem quam mala, pro caritatis lege, si fas sit, in bonum intentionaliter vertere.

2. — Estote, fratres, solitudinis amatores, et divagandi proclivitatem strenue compescite. Mundani homines a nobis hodie abhorrent quoniam ab ipsis veluti societatis hostes putamur, quasi plurima quae civitati obvernerunt mala, actione nostra intulerimus. Nimirum, «tamquam purgamenta hujus mundi, omnium peripserima, ut Apostolus, (2) facti sumus», perniciem fratribus inferentes, qui toto vitae nostrae tempore, totis viribus et modis, regnum Dei instituere inter fratres conati sumus, immo et ipsum civile bonum fovere, omni qua posuimus ratione, contendimus!

«Frequentes, ergo, in secreto, uti Sanctus Gregorius Magnus monet, raro simus in publico» (3); ita enim non otiosi videbimur neque aliena inquinabimur malitia. Nam putant plurimi clericos vitam ducere segniorem et pigram, et quasi fucos esse qui alieno labore et opibus vivant; neque adeo facile sit saecularia vitare contagia, ajente Tertulliano, quod pastores qui non necessitatis causa, sed dissipationis, inter corruptos versant, «de contaminatis contaminari» (4), cum et mens et lingua

(1) De Consideratione, 3, 6.—(2) 1 Cor. 4, 13.—(3) In 1 Reg. 4, 6.—(4) De Spectaculis, 6.

sacerdotis a cogitationibus et sermonibus laicorum prorsus debeant esse alienae.

3. — Cavete ne factionibus politicis misceamini, neve hominibus politicis morem geratis eo fine ut ipsis grati sitis, vel, quod esset abominabile prorsus, ut quae ad regimen vitamque nostram ecclesiasticam spectant, quaeque prudenti silentio contegi debent, ipsis pandatis, favorem mutuum aliquemve proventum ab ipsis accepturi. Tunc etenim non ecclesiastico nomine digni eritis, cum viro ecclesiastico cordi esse debeant omnia quae ad sanctam Ecclesiam pertinent et spectant, sed magis traditorum maculam ostendetis, quod sanctum canibus dederitis (1) eorumque morsibus, machinationibus, potestati, aliquid tradideritis eorum quae sanctam Ecclesiam aliquo modo attingunt. Nostis enim quam intentos habeamus hostes, qui ovinae pellem saepe induunt, et quantum adversus nos et nostra, doctrinam, cultum, bona, personas, laborant ut in pejorem conditionem nos injiciant.

4. — Satagite, venerabiles fratres, ut zelum pro Dei gloria et hominum vobis commissorum cura in animis vestris magis in dies foveatis. Est enim sacerdotum zelus veluti fons et origo unde, dante Deo, bona cuncta in aedificationem Ecclesiae efficaciter dimanant.

Videte, jheui, quo ardore, quo impetu seductores homines et perversi, ad fabulas ipsi conversi, ut Apostolus ait (2), toto corde et opere laborent in christiana fide e mentibus hominum eradicanda; in Dei cultu, sin minus extirpando, saltem falsarum religionum cultui exaequando; juventutis institutionem e manibus Ecclesiae eripiendo; sanctissimi Crucifixi imaginem e puerorum

(1) Mt. 7, 6. — (2) 2 Tim. 4, 4.

ludis effundendo; sacrum christianae traditionis depositum, a majoribus acceptum, temere dissipando; legibus, scriptis, auctoritatis abusu. omnia nostra evertendo. Hic, nimirum, est zelus vere daemoniacus, pro errore, contra Deum, adversus animas nobis concreditas.

Depositum caute et strenue custodiamus traditionum quas didicimus (1). Doctrinam sanctam, christianas et laudabiles populorum consuetudines, thesaurum, dico, vitae religiosae a majoribus congestum nobisque per saecula traditum et concreditum diligenter servemus, ita ut, etiam in hac temporum adversitate, nil ob nostram socordiam depereat eorum quae a parentibus accepimus.

Non enim raro evenit quod, sive ad laborem vitandum, superandasve temporum difficultates, sive ob fidei tepiditatem et vecordiam, sive adversantium et impiorum timore commoti, nostris faventibus commodis, facere desinimus quae debemus.

Meminerimus oportet verborum Domini, quae aptissime ad nostrum sensum spiritualiter trahi possunt: «Colligite quae superaverunt fragmenta, ne pereant» (2).

Ergo, zelo optimo obsistamus zelo pessimo, et nitamur totis viribus sarta tecta servare quae inimicus homini ruinare contendit.

5. — Ad haec omnia juvabit sedula nostrorum munerum exequutio. Unusquisque nostrum putet pro se latam paulinam ad Timotheum monitionem. «Ministerium tuum imple» (3). Magnum quidem opus magnusque labor plena adimpletio ministerii sacerdotalis; huic tamen Dominus alligavit et victoriam de inimicis, et instaurationem regni Dei in terris, et nostrum ipsorum salutem.

Recordemur peremptoria verba quibus in Evangelio

(1) 1 Tim. 6, 20. — (2) 16. 6, 12. — (3) 2 Tim. 4, 5.

et scriptis apostolicis iugiter et fortiter laborare compellimur: «Vigilate...» «Praedicate...» «Duc in altum...» «Docete...» «Insta opportune, importune, argue, increpa in omni patientia et doctrina...» «Attende tibi et doctrinae...» «Impendam ego et libentissime superimpendar pro animabus vestris...» «Labora sicut bonus miles Christi Jesu...» «In omnibus labora...» (1).

Itaque, fratres, quaecumque videantur ad bonum nobis commissae plebis spiritualiter profutura, haec aggrediamur prudenter, sine mora, constanti animo, caritate in Deum et in proximum ducti et induti.

Praedicate divinum verbum: «Praecepto, enim, divino mandatum est omnibus quibus animarum cura commissae est, oves suas verbi divini praedicatione pascerere» (2). Quando amiles fabulae, ut cum Apostolo loquamur (3), novitates profanae, impiae doctrinae, falsissimae narrationes, disciplinae sive theoriae ignarum populum adulantes circumquaque feruntur, per diaria folia et ephemerides, privatis conloquiis, sermonibus oratorum vulgi auribus blandientium, oportet extollamus vocem, et praedicatione non intermissa, fidei depositum in fidelium cordibus incolume servare, eosque contra errores serpentes scienter et caute custodire. (Nolite, fratres, nomen «canis muti» ultra mereri!) (4).

Sint vestrae ad populum conciones breves, opportune dispositae, lucidae, vividae, dicendi genere ad caput omnium accommodatae. Nulla in eis ad res politicas, ad personas, ad contentiones et facta localia allusio fiat, neque ipsa loquendi forma, ut aliquoties apud nostrates contigit, *dubitationi, suspicionibus, falsis interpretationibus* ansam praebeat. Sit omnis sermo vester divinae caritatis unctione conditus.

Nec licet, quovis praetextu, catechesim adutorum

(1) Mt. 24, 42; 1 Cor. 10, 13; Mt. 10, 7; Mc. 16, 15; passim. — (2) Conc. Trid. 23, 1 — (3) 1 Tim. 4, 7. — (4) Is. 56, 10.

et parvulorum intermittere. Nihil inimicus homo non molitur ad juventam, pueros praesertim, laizandam, ut ajunt. Nihil nos intentatum relinquamus quominus et leges impias frustremus et juvenum et parvulorum animas Deo et Ecclesiae servemus. Tempore opportuno, ne aliquae novissimarum legum scholas spectantium nostra fiant desidia peiores quam sunt, quae Nobis apta videantur decernemus.

Reliqua vero quae ad ministerium sacerdotale spectant, confessionum auditio, infirmorum visitatio, sanctum sacrificium et sacramentorum administratio; et alias, exercitium verae paternitatis sacerdotalis in plebem vobis commissam, caritatis in pauperes et egenos, dexteritas in consiliis, suavitas et comitas in conversatione cum populo vobis concredito, prudentia et cum severitate ductilitas in agendo cum his qui auctoritate civili polleant, patiens et abnegata caritas in dissidiis componendis, si quae sint; haec omnia spiritu vere sacerdotali, et visceribus Jesu Christi induti, curate implere. Tunc, enim, cum omnia omnibus facti sitis (1) et omnia vestra munera et officia exequamini, reapse ministerium vestrum, juxta Apostoli verba, adimplebitis.

6. — Prudentes estote, non illa tantum prudentia quae «Principum ars» vocari solet, illa, nimirum, virtus quae caput est in coeterorum regimine, sine qua virtutes ipsae in vitium multoties vertuntur; sed prudentiam hic dicimus pondus illud et lanx quibus aestimare noscimus quae dicenda sunt quaeve tacenda, an agendum necne et quomodo, praesertim in difficilioribus adjunctis ob immutatam rem politicam nobis creati solitis.

Frequentes ad Nos, fratres, perlatae sunt quaerimo-

(1) 1 Cor. 9, 22.

niae, sive ab his quibus civile populorum regimen conceditum est, de sacerdotum defectibus vel excessibus, sermone vel actione commissis; sive, quod frequentius existit, de abusibus in res, vel functiones vel personas sacras ex parte civilium magistratuum. Neque levia sunt incommoda et labores quae ex utraque parte perferre debemus.

Monemus vos, fratres, ut magna cum cautela res omnes geratis quae cum civili foro aliquo modo nectuntur, ut nec ansa quidem praebetur his qui rem moderantur civilem, ad iurgia litesve cuiuscumque generis movenda. Quod si, ob leges noviter inductas circa ea quae jurisdictionis sunt ecclesiasticae, coemeteria, cultus, christiana puerorum institutio, etc., aliqua moveatur quaestio, id ad Nos Nostramve Curiam citò proferre, iuxta ea quae a Nobis praescripta fuere per Litteras circulares ad vos omnes per Vicarios foraneos missas.

Etiam in privatis colloquiis maximam adhibere curam, praesertim in agendo de publica re: sunt enim plurimi quibus officium videtur commissum viros ecclesiasticos canendi in sermone; unde variae jam exortae sunt cum saecularibus magistratibus quaestiones.

Ex hac ipsa prudentiae regula, vetamus omnino accessum omnem ad crates et locutoria monialium eo fine ut, vigilantiae et protectionis specie, ad eas deferatis quae de eventibus praesentibus et futuris, in ordine civili sive sociali, agitantur. Etiam ex intemperantia et indiscretionem in hac re non parva retulimus incommoda. Sunt equidem, ad sanctarum virginum curam et tutelam, a Nobis viri prudentes deputati qui, juxta rerum et locorum adjuncta, ex sua prudentia, et facultate a Nobis data, quaecumque ipsis opportuna videbuntur providebunt.

7. — Tahter estote modesti, ut «modestia vestra nota sit omnibus hominibus» (1). Quaecumque alias decrevimus de hac re, sive pro tempore rusticationis, sive pro balnearum visitatione ratione adversae valetudinis, sive, praesertim, quae aliquoties circa profana spectacula indiximus, haec omnia adamussim servata volumus, addita iterum monitione circa sanctiones a sacris canonibus pro infractionis qualitate injunctas. Quae speciali modo iterata volumus de strepitoso spectaculo sub dio habitis, et maxime de agitationibus taurorum, quaecumque sint.

Nobis praeterea delatum est sacerdotes aliquos in nostro territorio, quamvis non ex nostris, habitum talarem deservuisse vestem laicalem induentes. Provideat equidem unusquisque de securitate sua, si res ita eveniant ut verum urgeat periculum. Si tamen res publicae, in ordinae civili vel sociali, non ultra inmutantur ac nunc eas apud nos videmus, omnino vetamus publicam gestationem laicalis vestis, praesertim in territorio. Nostrae jurisdictionis. Quod si aliquis, ut jam evenit, aliunde venerit ad aliquam ex nostris ecclesiis, sive ad sacrum litandum, sive sacrae praedicationis causa, non veste talari indutus, rectoribus ecclesiarum praecipimus ne tales sinant sacra ministeria exercere.

Caeterum, jugiter oportet meminisse, venerabiles fratres, verborum Apostoli ad Timoteum: «Exemplum esto fidelium in verbo, in conversatione, in caritate, in fide, in castitate..... Attende tibi et doctrinae: insta in illis. Hoc enim faciens, et teipsum salvum facies, et eos, qui te audiunt» (2).

Nil ergo quod statum nostrum dedecet admittamus, et tales esse curemus qui in opere et sermone omnibus christianae simus aedificationi, neque sinamus, li-

(1) Philipp. 4, 5. — (2) 1 Tim. 4, 12, 16.

et in minimis, ministerium nostrum vox nostra vituperari (1).

8. — Videte quoniam dies mali sunt, peioresque praevidentur futuri. *Sic tunc pugnemus ergo, carissimi, armis spiritualibus* quae posuit Deus in Ecclesiae suae castris: oratione, exhortatione, consilio, poenitentia, qua iram Dei, tot tantisque hominum peccatis concitata, a nobis avertamus; in omnibus confidentia in Deum posita, quoniam certissimum est non nos sufficere nobis, neque potentia nostra nos ipsos salvare posse, sed quod «*sufficiens nostra ex Deo est*» (2); et, ut piissimus aequae ac praepotens vir agebat de suis pugnis ac victoriis. «*Ego pugnavi, sed Deus et pietas vicit.*»

Et quoniam «*regnantibus impiis ruinae hominum*» (3), et, «*Cum impij sumpserint principatum gemit populus*» (4), satagite, fratres, ut orationibus non intermissis Dominum precemur ne homines sinat perversos, Deique et sanctorum rerum infensus, catholici nostri populi gubernacula diu tenere; vel, Qui etiam rebelles pro suo nutu voluntates flectit, eos ad bonam frugem deducat, ne saltem ipsos sinat ausu nefario catholicam doctrinam, cultum, mores, institutiones sacras, res aut personas attingere.

Haec omnia vobis scribere, fratres carissimi, opportunum duximus, ad mutuam instructionem et aedificationem, non quidem amaro acti animo, sed, utinam, «facti tormia gregis ex animo» (5) et spiritu caritatis induti, quae «*patiens est, benigna est, et non agit perperam*» (6).

Parcite, fratres, et pro Nobis orate, cui onus impositum est angelicis humeris formidandum, ut ait Tridentinum, episcopale, scilicet, officium, quod et patris et

(1) 1. Cor. 9, 3. — (2) 2. Cor. 13, 5. — (3) Prov. 29, 12. — (4) Prov. 29, 2. — (5) 1. Pet. 5, 3. — (6) 1. Cor. 13, 4.

fratris sit oportet in eos qui sacerdotalem dignitatem ex episcopali potestate participant, quique episcopo cordi esse debent uti cooperatores in opere Dei et filii carissimi.

E Monasterio Verulensi, ad aedes B. M. V. sub titulo *De Veruela*, die 23 Julii anni 1931.

✠ **Isidorus**, *Episcopus Turiasonensis*,

Aimar, Apticus, Tudelensis.

I.1

CAPÍTULO I

LA IGLESIA ANTE LA REPÚBLICA

-Documentos complementarios-

1. ~ "Circular XXI. Sobre la lectura de Prensa"

17 de noviembre de 1931. *BOE de Barcelona*, año 74, 21 de noviembre de 1931, núm. 21, págs. 648-651.

2. ~ "Sobre la fiesta del Corpus"

"*El Debate*", 5 de junio de 1931.

3. ~ "A.M.D.G.", la novela de Pérez de Ayala, inicia su vida teatral en un escenario mudo y ante una sala sonora. - Crítica, denuncia y consecuencias.

"*El Sol*", 7 de noviembre de 1931.

3.1. "A.M.D.G." - El Gobierno asiste a la 25 representación de la obra.

"*El Sol*", 17 de noviembre de 1931.

4. ~ Direccion Pontificia de la Accion Católica en España. Documento de Su Eminencia Reverendísima sobre la creacion de una "Bolsa Española del Trabajo, para obreros y patronos católicos."

Octubre de 1930, *BOE de Palencia*, año 81, 1 de junio de 1931, núm. 11, págs. 345-351.

5. ~ "El Seguro del Paro."

"*El Debate*", 28 de mayo de 1931.

1.- "Circular XXI. Sobre la lectura de Prensa."

17 de noviembre de 1931. *BOE de Barcelona*, año 74, 21 de noviembre de 1931, núm. 21, págs. 648-651.

El gravísimo deber pastoral, a Nós encomendado por la Santa Iglesia, de defender la pureza de la Fe y la santidad de costumbres entre el clero y fieles diocesanos (Canon 334, 343, 343, 1326, etc.), Nos impone también la obligación de ejercer la más rigurosa vigilancia sobre los libros, diarios, periódicos y folletos que se publican o se venden en las ciudades y pueblos de Nuestra jurisdicción (Canon 1397) y la de advertir a Nuestros amados hijos del peligro de las malas lecturas (Canon 1406).

En todos los tiempos ha sido sumamente funesta y lamentable la divulgación de la prensa impia e inmoral, lo es de una manera singular en nuestros días y en nuestra querida patria, donde tanto se prodiga la difusión de malos libros, prensa y periódicos con manifiesto daño de la salud de las almas.

Nuestro corazón de padre se llena de amargura al ver a tan gran número de cristianos víctimas de los perniciosos efectos de una prensa cuyo ideal no es otro que el de combatir a la santa sacrosanta Fe y promover por todos los medios la corrupción de las costumbres en nuestros pueblos. La falacia, la mentira, la más insidiosa calumnia contra las personas eclesásticas y religiosas con el fin de denigrarlas y despojarlas de su ascendiente moral, la soez caricatura y el triste lascivo para arrancar del corazón del pueblo toda creencia religiosa y toda idea de respeto al sacerdocio, son los resortes que utiliza la mala prensa cuya lectura envenena a tantísimas almas, quita la Fe que heredamos de sus padres y arrastradas a una vida funesta y depravada. Todo lo que de honorable, meritorio y digno tiene la prensa católica, lo posee lo abominable e indigno la que con calculada premeditación empuja nuestras creencias.

Por eso Nós, en las presentes circunstancias, consideramos muy grave deber recordar lo prescrito en el Código de Derecho canónico, el cual en su Canon 1399 establece lo siguiente: quedan prohibidos por el mismo derecho los libros, diarios, publicaciones, revistas y folletos (Canon 1364, § 3) que procuran destruir las verdades de la Religión, los que de alguna manera

apoyaban o ridiculizaban el dogma católico o defendían errores contrarios por la Santa Sede, menosprecian el culto divino, pretenden destruir la disciplina eclesiástica, insultan prepotentemente a la jerarquía eclesiástica, al estado religioso o clerical, y los que contienen o enseñan cosas lascivas y obscenas.

Conviene notar que según la misma ley eclesiástica (Canon 2398) la prohibición surte el efecto de que el libro, diario, periódico o revista no puede ser editado, leído, conservado, vendido o traducido a otras lenguas; y que según todos los tratadistas y moralistas no puede excusarse de pecado mortal quien habitualmente y sin la correspondiente autorización ha algunas de las publicaciones comprendidas en el expresado Canon.

Clarísimas y precisas son estas leyes eclesiásticas, las que, por otra parte, no hacen más que interpretar las exigencias del derecho natural que nos impone el deber de evitar, a todo trance, aquello que es nocivo a nuestro fin.

Más para que Nuestra paternal admonición tenga toda la eficacia que corresponde a la autoridad de Pastor de las almas, que ha de dar cuenta a Dios de todos sus actos, queremos concretar unas Nuestras afirmaciones, y, previo consejo de los miembros de Nuestra muy querida y solícita Comisión de Vigilancia, declaramos con todo el peso de Nuestra responsabilidad, que están comprendidos en el citado canon algunos de los diarios y periódicos que se editan en nuestra ciudad y en otras de la diócesis sin que pretendamos de modo alguno referirnos a su aspecto profesional y político como *El Diurno*, *Solidaridad Obrera*, *La Esquella de la Torratxa*, *El Papatu*, *L'Hora*, *La Batalla*, y otros que se publican en otras ciudades, como *La Traca*, *Fray Lazo*, *El Cencerro*, *La Tierra*, y otros similares, cuya lectura está prohibida bajo pecado mortal a los fieles de la Iglesia. Y exhortamos vivamente con Nuestra caridad de padre y con Nuestra autoridad de Pastor a todos sus directores, colaboradores y lectores no olviden que en su diócesis no lejano, tendrán que dar rigurosa cuenta al Señor Juez de vivos y muertos, Jesucristo, de la acogida que hayan dado a Nuestra admonición pastoral.

Y es también obligación Nuestra llamar la atención a Nuestros carísimos sacerdotes y amados fieles sobre la prensa llamada neutra, digase política o apolítica. Con poderosa razón y solitaria frecuencia recien en Nós y en Nuestra Comisión de Vigilancia denuncias documentadas sobre artículos más o menos intencionados que se oponen a la verdadera doctrina y a la disciplina de la Iglesia, y sobre grabados tendenciosos e

...cual es que violan la santidad de costumbres sobre las que estamos obligado a ejercer Nuestra más extrema solicitud. Es la lectura de los folios diarios y revistas, cuyo nombre por ser tan pozzantius oportuno consignar, pero que tal vez en su misma venetas, con gran sentimiento, en la pretensión de denunciar publicamente, de no atender a Nuestra voz pastoral, pero también guardarse Nuestro clero y fieles, pues su frecuente trato es un peligro un pequeño para la integridad de la fe y la pureza de costumbres cristianas.

Por fin, no queremos terminar la presente Circular sin reiterar Nuestra más efusiva felicitación, expresada en Nuestra exortación pastoral del pasado julio, a la prensa netamente católica que, ocupando su puesto de honor, defiende con bizarría singular las doctrinas cristianas contra las blasfemias, contra la escuela única y laica, contra la disolución de las Ordenes religiosas, contra la profanación del matrimonio y santidad de la familia cristiana, y demás falsedades y proezas osadas de la prensa sectaria. Procuren los católicos cumplir con su deber de protegerla eficazmente y difundirla, seguros de que harán una buena y gran obra que Dios les recompensará debidamente, y nuestra Santa Madre la Iglesia les agradecerá solemnemente.

Barcelona, 17 de noviembre de 1931.

EL Obispo.

Los felices, Pastores y encargados de iglesias se servirán leer al pueblo fiel la precedente Circular el primer domingo de diciembre.

2.- "Sobre la fiesta del Corpus".

"El Debate", 5 de junio de 1931.

Barcelona:- Aunque por acuerdo del prelado y del cabildo catedral no salió la procesion, toda la ciudad fue engalanada con colgaduras y hubo una gran asistencia de ríeles a la iglesia y a la procesion en el claustro.

Avila:- La procesion se celebra con el itinerario de costumbre y con mas hombres que otras veces. Se realiza en un clima de gran solemnidad y asistencia.

Bilbao:- La procesion fue prohibida por el Gobernador, pero se celebra en el interior del templo con una gran asistencia de ríeles.

Cádiz:- La procesion estuvo muy concurrida con el itinerario de costumbre. En los balcones lucian colgaduras y adornos.

Córdoba:- La procesion tuvo lugar por los alrededores de la catedral: millares de hombres y mujeres cubrieron carrera con velas encendidas.

Cuenca:- La fiesta del Corpus se celebró en el claustro de la catedral con gran concurrencia.

León:- La procesion se efectuó por las principales calles de la ciudad y asistieron mas caballeros que en otros años. Las casas estaban adornadas con colgaduras.

Lerida:- La procesion del Corpus se realizó en el interior de la catedral, el templo estaba lleno y muchos balcones de las casas engalanados.

Malaga:- Por acuerdo del cabildo, no se celebró la procesion ni en las calles ni dentro de los templos. Sin embargo a la misa cantada asistieron numerosísimos ríeles, sobre todo señoras. No se ha trabajado en las oficinas publicas y los comercios permanecieron cerrados. Los obreros si han trabajado.

Orense:- La procesion resultó mas solemne que otras veces, y a ella acudieron mas hombres y mujeres que nunca, incluso aquellos que otros años no habia ido. También asistieron dos bandas, una de ellas la municipal, pero las autoridades civiles y militares no asistieron.

Oviedo:- Por acuerdo de la autoridades eclesiásticas, la procesion del Corpus se celebró en el interior del templo. El Gobernador sintió que hubiese sido así, pues pensaba que no habria alteracion del orden, pero las autoridades eclesiásticas no tenían suficientes garantías de ello.

Palma de Mallorca:- La fiesta se celebró en el interior de la catedral. La asistencia fue de diez mil personas que dieron dos vueltas a la iglesia.

Pamplona:- La procesion se realizó por las calles de la ciudad en una imponente manifestación de fe. El trayecto que recorrió estaba engalanado con tapices y colgaduras. A ella asistió el presidente del Ayuntamiento, el Secretario un vocal con los maceros y la bandera de Pamplona.

Salamanca:- La procesion se celebró por las calles; asistieron mas caballeros que en años anteriores.

San Sebastian:- La procesion fue suspendida en evitación de incidentes, pero cultos solemnes se celebraron en los templos.

Santiago:- A pesar de estar todo dispuesto para la procesion, esta fue suspendida a causa de la lluvia, y se celebró en el interior de la catedral.

Segovia:- La procesion se celebró por las calles con gran asistencia, pero las autoridades no asistieron.

Sevilla:- La fiesta del Corpus se celebró con gran solemnidad y con mas fervor que ningun año, a pesar de faltar el aparato oficial. Todos los balcones del trayecto estaban engalanados y el suelo sembrado de flores y tomillo. El trayecto estaba cubierto por señoras con ramos de flores. En la procesion iban muchos oficiales del Ejército francos de servicio. La procesion hizo un itinerario mas corto que otros años y a ella asistieron unos ocho mil hombres.

Los edificios publicos han ostentado la bandera nacional, y el comercio ha cerrado por la tarde.

El Gobernador se congratula del orden demostrado y lamenta que se hubiera acortado el itinerario.

Soria:- Se celebró una procesion concurridísima.

Tarragona:- La procesion transcurrió por la parte alta de la ciudad con una gran concurrencia de fieles y con la asistencia del arzobispo y de siete conejales de diferentes tendencias.

Teruel:- Se celebró por las calles con balcones engalanados y con una gran concurrencia.

Toledo:- Con gran solemnidad se celebró la procesion por el trayecto de costumbre. Faltaban las autoridades y la Academia militar, que no cubrió la carrera.

Valladolid:- La fiesta del Corpus se convirtió en un acontecimiento de gran fervor religioso, mas que otros años, y se celebró por las calles de la ciudad.

Valencia:- Se celebro en el claustro con gran numero de fieles.

Vitoria:- La procesion recorrio las calles, con la asistencia , a titulo privado, del Gobernador, el Alcalde y algunos concejales.

Zamora:- La procesion se celebro por las calles de siempre; no asistieron las autoridades.

Zaragoza:- La fiesta del Corpus se celebro en los claustros de las iglesias, ya que las autoridades eclesiasticas suspendieron el recorrido publico debido a las circunstancias.

Madrid:- La celebracion se hizo en el interior de los templos, que estuvieron enormemente concurridos.

- 3.- "A.M.D.G.". La novela de Pérez de Ayala, inicia su vida teatral en un escenario mudo y ante una sala sonora.-
Crítica, denuncia y consecuencias.

"El Sol", 7 de noviembre de 1931.

Teatro Beatriz

"A.M.D.G.", escenificación de la novela de Pérez de Ayala, por los Sres. López de Carrión y Martín Galiano.

No ha sido la batalla de Hernani, pero batalla sí ha sido. La información teatral, si hubiere de recoger exactamente el suceso, establecería una competencia difícil con otra sección del periódico. El cronista, si tuviera que que formar juicio sin más dato que el de la repercusión encontraría grave dificultad en su cometido. Porque desde luego declara que de los varios cuadros del acto primero no llegó a oír una sola palabra. Las figuras gesticulaban en escena como en la pantalla del "cine" cuando era mudo; la sala, en cambio, era sonora y vociferante. A las protestas de los que iban a protestar contestaban los que, ante todo, querían oír. A las palabras que se cruzaban sucedieron los golpes. Butacas rotas. Guardias. Pero ya estamos en el suceso que, a nuestro entender, es resultado de una táctica errónea y sólo puede servir de reclamo a la comedia.

Esta guarda entera fidelidad esencial a su fuente originaria. Los adaptadores han trasladado casi siempre las palabras mismas del autor, sin retroceder ante las más crudas expresiones. En el trabajo de condensación se percibe, sin duda, la violencia que han hecho a determinadas situaciones para refundirlas en una: quebranto inevitable que la plasticidad del teatro impone a la amplitud de la novela. Bien resueltas han dejado dos dificultades de bulto: el cuadro de los ejercicios espirituales, que aún podría acortarse, y el final, en que el jesuita que se aboga en la estrechez de su Orden proclama su rebeldía.

Esto en cuanto a la parte de técnica teatral. En el pensamiento, la comedia es lo que era la novela, publicada hace veinte años: una pieza de combate. Ortega y Gasset, en un artículo escrito entonces, y recopilado más tarde en "Personas, obras, cosas", la analizaba en su alcance pedagógico y la consideraba como un llamamiento a la atención de los gobernantes. Hoy, en circunstancias muy distintas, conserva ese valor. Su tono, bravamente realista, ennegreca acaso, por condensación, lo que en vida se da más disperso; el teatro, aun evitando los pasajes y pormenores que la novela no tiene por que velar, aun quitándose esa parte de fuerza, hace, condensando más aún, ciertos trances todavía más duros.

En cuanto a la interpretación y postura en escena -sobre unos decorados muy sobrios y justos de Silvio Bermejo-, se ha de alabar el conjunto logrado con una compañía formada rápidamente. Actores como Martínez Tovar, Elías Somers, La Riva, Cembreros, Mursot, Villagomez, Domínguez Luna, que jamás pensaron formar parte de la Compañía de Jesús, dan a los diversos tipos de jesuitas, el intelectual y el místico, el avieso y el cruel, el sabio y el bobo, sus respectivas facies y cuerpos. Una actriz joven, Mercedes Mariño, en el tipo de Ruth Flowers, ha interesado a un público que tenía sobrados motivos de distracción; es la única inglesa de teatro que hasta ahora me ha dado la verdadera sensación de una inglesa. Los muchachos que hacen los escolares (entre los cuales hay un Calvo y un Vico, de apellido, por supuesto), en su misma imperfección, contribuyen a la realidad de las escenas en que intervienen, destacándose los encargados de los papeles de Bertuco, Coste y Manolito Trinidad.

El público, tranquilo al fin, aplaudió las terminaciones de acto y de cuadro que pudieron oírse con calma, y reclamó insistentemente la presencia del Sr. Pérez de Ayala, que no se hallaba en el teatro.- E. Díez Canedo.

Denuncia que presenta el señor Rivas Cherif ante el señor ministro de la Gobernación.

"Se ha presentado, señor ministro, una ocasión excelente de aplicar la ley de Defensa de la República. Anoche se ha representado en el teatro Beatriz una obra nueva, "A.M.D.G.", sacada de la famosa novela de Ramón Pérez de Ayala. Yo he sido director de escena accidental de la compañía formada a tal objeto.

La Empresa y la Dirección artística teníamos noticia de que nutridos elementos jesuiticos se aprestaban a impedir el estreno de la comedia. Awise al personal y oportunamente a la Sección de Orden público de la Dirección de Seguridad, en ausencia del señor director. Me aseguraron que el servicio estaba asegurado. No fue así. No más levantarse el telón y aparecer5 el prólogo pudimos advertir que la escasa fuerza era impotente, cuando no se resistía a contener los desmanes de un centenar disperso de protestantes irreductibles. Los ha ha habido muy significados. Hemos podido comprobar la lenidad de los jefes de la fuerza, que obligados en último extremo a reducir a los escandalosos de un palco, los acompañaban a la salida tuteándolos con amistosísima reconvencción. Un oficial del Ejército que, sin localidad, escandalizaba en el "foyer" del teatro, ha insultado a uno de los representantes más distinguidos de la Empresa.

Como he de denunciar cuanto he visto, y conmigo varios espectadores indignados de la coacción violenta tolerada y aun amparada, por la autoridad, me adelanto a protestar

publicamente ante vuestra excelencia, que ha de amparar, estoy seguro, el interes de una Empresa y el de los republicanos, conibidos e inermes ante un puñado de vociferadores impunes. - A. Rivas Cherif."

Nota de la Dirección general de Seguridad

Anoche, con motivo del estreno en el teatro Beatriz de una obra inspirada en el libro de D. Ramón Pérez de Ayaia titulado "A.M.D.G.", se produjeron algunos incidentes, que dieron lugar a la intervención de la fuerza pública.

Cierto número de espectadores mostróse disconforme con la tendencia de la obra, y exteriorizó su protesta en forma ruidosa. Se dieron vivas expresivos de aquella disconformidad, y esto dio lugar a una contraprotesta. Entre los bandos se cruzaron insultos y denuestos, y los más exaltados se agredieron mutuamente.

Como al empezar el alboroto apenas se encontraban agentes de la autoridad en el teatro, los incidentes impidieron que pudieran oirse los dos primeros actos.

Por fin llegaron los guardias de asalto, que sacaron del salón a los alborotadores.

Una vez en la calle, se reprodujo el escándalo, y los guardias iniciaron una carga. Practicaron varias detenciones.

En la refriega resultaron deshechas veinte butacas.

El total de los detenidos con motivo de los incidentes desarrollados en el teatro Beatriz se eleva a 45, entre ellos varios militares.

A las cuatro y media de la madrugada llegó a la Dirección general de Seguridad el director, el señor Galarza, acompañado del ministro de la Gobernación, Sr. Casares Quiroga.

Ambos se encerraron en el despacho del director y celebraron una conferencia.

3.1. - "A.M.D.G.".- El Gobierno asiste a la 25 representación de la obra.

"El Sol", 17 de noviembre de 1931.

Ayerche, a la 25 representación de "A.M.D.G.", como en las bodas de plata del ilustre embajador de España en Londres con su obra famosa, asistió gran parte del Gabinete.

Al aparecer el presidente, señor Azaña, a los acordes del Himno de Riego, el público, que llenaba el teatro, rompió en aplauso casi unánime.

Acompañaban al presidente su distinguida esposa, el ministro de la Gobernación y el de Marina. En un palco de enfrente se sentó Indalecio Prieto, y en otro, Nicolau d'Oliver. Numerosas palmas fueron el colofón de todos los cuadros. Aplausos y risas que demostraban la compenetración del ambiente en la sala con el del escenario.

Pérez de Ayala presenció la representación desde el palco presidencial. Al final de la obra inclino el torso hacia el patio de butacas para recibir el tributo de simpatía.

Por lo demás, la representación de "A.M.D.G." transcurrió en la mayor placidez y el mayor orden, no siendo necesaria la utilización de la fuerza pública, de los abundantes guardias de asalto discretamente distribuidos por el teatro y sus alrededores.

4.- Octubre de 1930. Dirección Pontificia de la Acción Católica en España. Documento de Su Eminencia Reverendísima sobre la creación de una "Bolsa Española de Trabajo, para obreros y patronos católicos"

BOE de Palencia, año 31, 1 de junio de 1931, núm. 11, págs. 345-351.

La preocupación actual

Una gran crisis económica mundial tiene en la actualidad preocupadas las inteligencias de los financieros y hombres sociales y pone en angustiosa expectación y zozobra los ánimos de las gentes; y lo que más es de sentir, lanza a la calle, en todas las naciones, un número cada día mayor de obreros sin trabajo expuestos a los rigores del hambre y de la miseria, a los peligros de la ociosidad y a las tentaciones de los agitadores y explotadores del pueblo.

Muy apropiadamente podríamos aplicar a este mal gravísimo que padecemos, aquellas tan significativas frases que escribía el Papa de los obreros, León XIII, al principio de su Encíclica *Rerum Novarum*, cuyo cuadragésimo aniversario se celebrará el año entrante: «...cuánta gravedad encierra se colige de la viva expectación que tienen los ánimos suspensos y de lo que ejercitan los ingenios de los doctos, las juntas de los prudentes, las asambleas populares, el juicio los legisladores, los consejos de los príncipes; de tal manera, que no se halla ya cuestión ninguna, por grande que sea, que con más fuerza que está preocupe los ánimos de los hombres».

La crisis del trabajo, principal preocupación de los actuales Estados

En efecto, dentro del amplísimo campo de las cuestiones sociales, la actual crisis económica, y particularmente la falta de trabajo que de ella, naturalmente, se deriva, van poniéndose cada vez más en primer plano, enlazando y aun subordinando así todos los demás conflictos y problemas que hoy interesa y apasionan al mundo.

La voz de la Iglesia

La Iglesia, como madre solícita y cariñosa, no puede desinteresarse de los muchos y graves peligros que de esta crisis económica universal han de seguirse necesariamente así para el bienestar común de la sociedad como para el bien espiritual y material de los individuos que la integran.

Hablando en términos generales sobre la cuestión social de nuestra época, decía León XIII, en su documento *in ipso*, dirigido al entonces Imperio de Austria: «Si los Obispos consagran a esta cuestión cuanto les sea posible, sus pensamientos y sus desvelos; si se esfuerzan en que los preceptos evangélicos de la justicia y caridad influyan en todas las clases sociales y arraiguen profundamente en los espíritus; si logran por medio de su actuación o influencia aliviar de algún modo la precaria condición de los obreros, habrán merecido muy bien a la vez de la Religión y de la Patria.»

Pío X, por otra parte, en una célebre carta dirigida al Episcopado brasileño, describe que se recomendara con gran interés la acción social cristiana a todos los católicos, y afirmaba «ser ello un postulado de la cristiana caridad que nos ordena ayudarnos mutuamente los unos a los otros, y que si bien pone en primer lugar el celo por la salvación eterna de las almas, no olvida, sin embargo, las necesidades materiales y el bienestar común de los hombres.»

Conforme, pues, a las sabias enseñanzas y recomendaciones que en estos y otros muchos documentos pontificios se inculcan, Nos dirigimos también ahora a todos los católicos españoles para exhortarles al ejercicio de la caridad cristiana, que nos ordena ayudarnos los unos a los otros, no sólo en el orden espiritual, sino también en el orden material y económico.

Católicos irreflexivos

Porque advertimos con dolorosa frecuencia en nuestra Patria que hombres reconocidos públicamente por cristianos prácticos y fervorosos y de excelentes cualidades y aptitudes, no se ven debidamente secundados y favorecidos en sus negocios y en el ejercicio de sus respectivas profesiones y carreras por quienes militan en nuestro propio campo y que tienen quizás muy a gloria su catolicismo.

Son muchos, por desgracia, los católicos irreflexivos que no reparan en el doble mal que hacen cuando favorecen y acreditan con sus compras, encargos, consultas, lecturas, etc., a personas y empresas que poco o nada atienden a las leyes de la moralidad o de la justicia, o que tal vez ni siquiera respetan nuestra santa religión, antes la combaten y la ultrajan; y no solicitan, como fuera lógico, oportuno y caritativo, los productos, los servicios y los trabajos de aquellos otros que añaden a sus méritos y cualidades, en orden a lo material y económico, una honradez acrisolada, una fe viva y laboriosa y tal

vez un amor ferviente y abnegado por el reinado social de Jesucristo.

Injusticia y escándalo

Sería realmente injusto y escandaloso que, pudiendo el pueblo católico favorecer, sin perjuicio suyo, a los agricultores, industriales, comerciantes, escritores y hombres de carrera de su propio campo—los cuales dejan a veces de percibir pingües ganancias por atender a los deberes de su conciencia—favoreciera más bien a personas y empresas que meran auxiliares poderosos de la perversión de las ideas y de la corrupción de las costumbres.

El ejemplo del enemigo

A la vista de todos está, por otro lado, cómo se ayudan mutuamente para el mal y para sus intereses materiales, los enemigos de la Iglesia, los partidarios de todos los laicismos y de todas las revoluciones y evoluciones contra la religión y la patria.

Deberes de los verdaderos católicos

Justo es, pues, y necesario que los católicos de verdad, que han de tener como norma de conducta la caridad y la justicia cristianas, se esfuercen, aun a costa de cualquiera sacrificio, en prestarlo mutuamente eficaz ayuda en todos los órdenes de la vida, con el fin de obtener para sí y para los demás la mayor cantidad posible de bienes espirituales y materiales.

El problema del paro

Si fijamos particularmente nuestra atención en la clase obrera, claro es que la caridad cristiana, que es la mejor salvaguardia y exaltación de la justicia, debe aplicarse de una manera especialísima a los que se ven hoy reducidos a triste necesidad y se sienten además agitados de graves inquietudes y angustiosos temores para el día de mañana, por efecto de haber quedado en mal hora comprendidos entre las víctimas del tan terrible paro forzoso. Problema es éste, como arriba indicábamos, acaso el más grave de todos los de carácter económico-social que nos plantea la sociedad moderna, y que tiene hondamente preocupados a los gobiernos y a los hombres pensadores y reflexivos. Por causa muy útil y razonable debo, pues, reputarse cualquier ensayo o esfuerzo para prevenirlo o atenuarlo en lo posible, tomando por base un profundo espíritu de justicia y caridad cristianas.

El remedio está en nuestras manos

No cabe duda de que, si los patronos católicos, las sociedades y empresas por ellos dirigidas o intervenidas, las entidades de Acción Católica y especialmente los sacerdotes y las comunidades religiosas de ambos sexos, cumplen puntualmente con el grave deber que la equidad y la caridad nos imponen, de ofrecer y proporcionar trabajo a los obreros católicos, no

cabe dudar, repetitivos, que no se verán éstos, en ningún caso extremo, reducidos a la dura necesidad de dar su nombre a organizaciones aconfesionales o anticatólicas y revolucionarias, en las que forzosamente ha de correr grave riesgo su espíritu de fe católica cristiana y aun la misma sagrada fe que heredaron de sus mayores.

Olvido anticristiano

No puede haber cristiano alguno consciente, ni menos persona piadosa y religiosa, o dedicada a la acción social católica, que no advierta cuán inhumano y anticristiano sería permitir que el obrero católico caiga en el angustioso dilema, que ya indicó León XIII en su Encíclica *Humani Generis*, de verse reducido a la miseria y al hambre junto con su pobre mujer y sus inocentes hijos, o formar parte, contra su voluntad y sus más sagradas convicciones, de aquellas sociedades antes dichas, exponiéndose en consecuencia a aquellos tan graves y trascendentes peligros.

Deberes de justicia y caridad

Pero no basta favorecer al obrero católico con esta tan excelente obra de caridad cristiana, cual es la de proporcionarle trabajo, único medio con que cuenta para poder ganar honestamente su sustento y el de los suyos. Es menester, además, excitar el celo de los amos y patronos católicos para que cumplan con los deberes que la justicia y la caridad les imponen, pues de lo contrario no podrían exigir ellos a su vez razonablemente el respeto a sus propios derechos. Y a la verdad, sería cosa lamentabilísima que un obrero católico se viera constreñido a abandonar su colocación en casa de un patrono católico por no cumplir éste con los más elementales deberes de tal en materia de justicia y de caridad cristiana, como lo sería igualmente el que un buen patrono católico se viera en la triste necesidad de despedir a un obrero católico por no cumplir este sus deberes profesionales o por falta de suficiencia técnica en su cargo u oficio.

Amparo social, orientación profesional, formación cultural y técnica del obrero

Ni es bastante lo dicho: debe, además, excitarse el celo de todos a fin de procurar en el mayor grado posible a los obreros católicos los beneficios y el amparo de la legislación social, de la orientación profesional y de la formación cultural y técnica. Como también debe ponerse muy especial cuidado en evitar que los trabajadores dejen inconsideradamente la vida campesina y sus pueblos y aldeas para acudir a las capitales en busca de un trabajo que acaso será imposible facilitarles. Porque no hay duda que la aglomeración excesiva de obreros en las grandes ciudades, la falta de formación y de capacidad técnica en el trabajador, la equivocada elección de un oficio no acomodado a las propias cualidades físicas o psicológicas

y aun, a veces, la falta de aquel apoyo jurídico que garantiza la libertad del trabajo, son causas poderosísimas del paro forzoso, que los católicos debemos a todo trance impedir en lo posible, sobre todo cuando se trata de obreros que nos merecen especial afecto y atenciones por mantenerse firmes en su cristiana fe y en sus intachables costumbres.

La religión y moral católicas son base la más sólida del bienestar social

Y puesto que la religión y la moral católicas son la base más sólida de todo bienestar social, y así, ellas es imposible hallar solución adecuada y conforme a la humana dignidad ni a este mal de que venimos hablando, ni a otro alguno de los males sociales que nos aquejan, se hace necesario trabajar con intachable celo para cristianizar intensa y profundamente la vida del capital y del trabajo, para que así los patronos como los obreros, no sólo en el orden individual y familiar, sino aun en el profesional y económico, y, por consiguiente, en cuanto tales patronos u obreros como hombres verdaderamente católicos, conscientes y fervorosos, en cuyos negocios y trabajos reine, complacido y generoso de sus dones espirituales y temporales, nuestro adorable Redentor Jesucristo.

Hacia las soluciones prácticas.—La Bolsa del Trabajo

Así, pues, tanto para evitar el cruel dilema antes mencionado en que corren peligro de verse los trabajadores manuales e intelectuales, como para atenuar, en cuanto sea posible, las causas del paro forzoso, para encauzar la cooperación material y moral del público católico en favor de las Empresas y patronos católicos y para infiltrarlo más y más en el mundo económico el espíritu de Cristo, juzgamos en gran manera oportuno establecer una «Bolsa Española del Trabajo» para patronos y obreros católicos manuales e intelectuales, que, conformando en todo sus propósitos y empresas, no sólo con los preceptos de la religión, sino también con peculiares intentos de la Acción Católica, tenga organizadas secciones especiales para hombres y para mujeres y extienda sus servicios a todos los ramos de la agricultura, de la industria del comercio y de las profesiones liberales.

Es nuestro más vivo deseo que esta nueva institución se extienda rápidamente desde Madrid a todas las capitales de provincia y demás poblaciones de alguna importancia, y hacemos fervientes votos para que halla por doquiera decidida protección, tanto moral como material, en todas las clases sociales y en todas las sociedades y Empresas económicas de

los católicos o en que los católicos tengan especial interacción o marcada influencia; pues fácil es, de advertir de cuál eficaz auxilio pueda ser, una institución semejante para todas las demás obras del apostolado cristiano. «Las Asociaciones, Nos decía el Sumo Pontífice en la inolvidable preciadísima carta *Laelus sane nuntius*, que se dignó dirigirnos con motivo del Primer Congreso de Acción Católica, las Asociaciones que, conformando sus propósitos y empresas con los preceptos de la religión y los ~~ocurrentes~~ intentos de la Acción Católica, tienen por blanco ayudar a los ciudadanos, ya en asuntos económicos, ya en el ejercicio de su profesión, conviene de todo, punto que en las materias concernientes a los fines de la Acción Católica se sujeten a ella y sirvan a la obras del apostolado cristiano».

Por tanto, como director Pontificio de la Acción Católica en España, declaramos fundada la «Bolsa Española del Trabajo» para patronos y obreros intelectuales o manuales; la incorporamos oficialmente en el organismo nacional de la Acción Católica, con vida propia y con propias juntas y secciones, y con reglamentos que en breve se publicarán.

Para que esta nueva institución reporte los abundantes frutos materiales y morales que deseamos, bendecimos cordalmente a cuantos en ella y por ella ejerciten su caridad y su celo, y pedimos fervientemente al Sagrado Corazón y a la Virgen Santísima del Pilar, a quienes consagramos desde este momento esta nueva institución de la Acción Católica Española les concedan a manos llenas su favor y su gracia.

Toledo, Fiesta de Cristo Rey de 1930.

† PEDRO, CARO, SEQUERA Y SÁENZ.—Arzobispo de Toledo.

5.- "El Seguro del Paro"

"El Debate", 28 de mayo de 1931.

El ministro de Trabajo ha llevado a la Gaceta un decreto sobre creación de un servicio de previsión contra el paro forzoso, cuyo texto conocen ya nuestros lectores.

Una vez más hemos de lamentar el abuso ya habitual en el Gobierno de legislar por decreto en materias que no son de necesidad urgente. Por lo mismo que la reforma -muy modesta, como ya veremos- no aporta una verdadera solución al problema de la crisis de trabajo, parecía natural esperar a la reunión del Parlamento, que para fecha tan próxima se anuncia. Téngase además en cuenta, que la solución del problema del paro ha suscitado grandes controversias en todos los países, que en muchos ha provocado varias crisis políticas y que en todos ellos la experiencia ha evidenciado defectos y ventajas en unos y otros sistemas. Todo ello debió aconsejar al ministro el aplazamiento del problema, para que su solución fuera, en lo posible, Nacional.

Sentado este reparo fundamental de procedimiento, entremos en el fondo del asunto.

El decreto del ministro de Trabajo implanta una reforma, que EL DEBATE ha de ver con simpatía. España es, en la actualidad, uno de los países más necesitados de innovaciones de esta índole. En la sociedad española, apenas ha entrado el espíritu de León XIII, que el pontífice actual recuerda con frases vigorosas en la Encíclica que hoy publicamos.

En la "Rerum Novarum" tienen los católicos el más certero enjuiciamiento del problema del paro. A una sociedad bien constituida -dice- corresponde suministrar los bienes corporales y externos, y para la producción de éstos no hay nada más eficaz ni más necesario que el trabajo de los proletarios. Trabajo en que deberán encontrar la remuneración justa que baste a la satisfacción de sus necesidades. Queda así solemnemente proclamado el derecho al trabajo, como uno de los principios fundamentales de toda sociedad política justa.

Más la realidad nos dice con arta frecuencia que la sociedad no suministra al obrero el trabajo a que tiene tan evidente derecho y surge del ahí la necesidad de crear instituciones que atenúen el mal en lo posible.

Dos sistemas fundamentales se aplican al remedio del paro forzoso. El obligatorio, en forma de seguro técnico, que está en vigor en Alemania, Inglaterra, Irlanda, Austria, Italia, Polonia y Rusia, y el facultativo o voluntario, aplicando en Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia y Suiza y que

afecta a la modalidad de subsidios o bonificaciones a las entidades que ya por sí mismas realizan, en orden al paro, la función de asistencia social.

Este segundo procedimiento, denominado sistema de Gante, y que cuenta ya con alguna tradición en nuestra Patria, es el que ha adoptado el señor Largo Caballero.

La orientación nos parece prudente. Sin un avance estadístico de los obreros parados y con una escasa preparación de la masa social en la práctica de los seguros, la implantación del de paro forzoso, con carácter obligatorio, hubiera constituido una grave temeridad, determinante de un completo fracaso. Queda así reducida la reforma a la creación de un organismo semi-autónomo, encargado de administrar los créditos que el Estado dedica al socorro del paro y de aplicarlos por conducto de las organizaciones sindicales y paritarias, que ya cumplen en mayor o menor escala esta finalidad. Con este sistema se prepara el camino a reformas de mayor alcance, y sobre todo, se evita que el remedio de la crisis del trabajo tienda a gravitar sobre el Tesoro público, en lugar de encontrar su principal remedio en el esfuerzo social y en la justa ordenación de la economía pública y privada.

Por último, mediante este decreto, cumple España el compromiso que contrajo en el orden internacional por la ratificación del convenio de Washington en 13 de julio de 1922.

No se nos oculta que la nueva reforma despertará los recelos de muchas gentes, que antes que al principio de justicia que la informa, atenderán a los reparos de detalle o a los posibles abusos de su implantación. A quienes así piensen habremos de decirles, ante todo, que los defectos que presentan en la práctica las instituciones se corrigen con la acción constante de los ciudadanos, dentro de los límites que las leyes les señalan, nunca con la inhibición y con la crítica.

Y a nuestros lectores, en general, habremos de encarecerles una y otra vez la necesidad de abrir con máxima generosidad el espíritu a las reformas sociales, inspiradas en la justicia, que demanda de un modo imperioso la situación de nuestra Patria. Pío XI, con expresiones enérgicas, que otro día comentaremos, llama la atención sobre la enorme responsabilidad de quienes "abusan de la Religión misma, haciendo de su nombre una cortina, para cubrir las injustas vejaciones que realizan, con objeto de sustraerse a las reivindicaciones plenamente justificadas de los obreros".

¡Que estas severas palabras del Pontífice presidan la mente de los españoles al enjuiciar las reformas sociales!.

II

CAPÍTULO II

=====

LA CONSTITUCION DE 1931

=====

1.- "Comentario.- Nación, Estado, Iglesia, Religión"

"El Sol", 2 de julio de 1931.

2.- "La cuestión religiosa"

"El Debate", 21 de julio de 1931.

3.- Carta Pastoral del Episcopado sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a los católicos.

25 de julio de 1931, *BOE de Toledo*, año 87, 14 de agosto de 1931, núm. 6, págs. 269-280.

4. Mensaje de la provincia eclesiástica de Sevilla a las Cortes constituyentes.

4 de septiembre de 1931, Archivo de las Cortes Españolas, "*Exposiciones pro Iglesia*", legajo 539, 1931.

5.- Episcopado español a los obispos de todo el mundo.

1 de julio de 1937. Reproducido en IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del Episcopado español, 1870-1974*, págs. 219-242.

6. - "A las Cortes constituyentes."

19 de agosto de 1931, *BOE de Segovia*, año 76, 31 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 364-371.

7.- Informe de Ricardo Gómez Rojí

1 y 2 de octubre de 1931, *Església i Estat durant la segona República espanyola*, I, págs. 348-350.

8.- "Enmienda al art. 24 del proyecto de Constitución.- La definición de la Iglesia católica como corporación de Derecho público.- Radicales y Acción Republicana votarán a favor de esta solución"

"El Sol", 6 de octubre de 1931.

9.- 1. Plan de acción parlamentaria.- 2. Táctica general (en defensa de la Compañía de Jesús).

S.f., *Església i Estat durant la segona República espanyola*, I, págs. 366-369.

10.- "Los diputados católicos a la opinión"

15 de octubre de 1931, *Església i Estat durant la segona República espanyola*, II, págs. 405-407.

11.- Discurso de Ortega y Gasset en los debates del proyecto de Constitución - Intervención de 4 de septiembre de 1931.

"El Sol", 5 de septiembre de 1931.

12.- "Nuestro problema religioso"

"El Sol", 11 de septiembre de 1931.

13.- "Ante la cuestión religiosa"

"Ahora", 30 de septiembre de 1931.

14.- "El debate religioso"

"El Sol", 30 de septiembre de 1931.

15.- "La reacción, el cura y la mujer"

"El Sol", 3 de octubre de 1931.

16.- "Comentarios.- El confesionario y las mujeres de España".- Por Don Miguel de Unamuno.

"El Sol", 4 de octubre de 1931.

17.- Los metropolitanos a Pío XI.

3-7 de diciembre de 1931. *Església i Estat durant la segona República espanyola*, II, págs. 205-213.

18.- "Comentarios a la Constitución"

"Documental", núms. 1-3 de 1932. Recogido en *Església i Estat durant la segona República espanyola, 1931/1936*, págs. 484-505.

1.- Comentario.- Nación, Estado, Iglesia, Religión

**El Sol*, 2 de julio de 1931.*

Heme recogido esquivando el trajín de las elecciones, o, mejor, de los escrutinios. Tengo algo más que escudriñar -o desgorgar, que se diría traduciendo del catalán- que no votos de sufragio. Ni he de comentar elecciones, escrutinios y escudriños, ¿para qué? Comentaré, en rumia, mi último comentario, aquel en que os decía de la Iglesia y del Estado, del Pontificado y del Imperio, la patria y la religión. Porque me he dado cuenta de que nos conviene precisar más las palabras, ya que toda lógica es gramática.

Y ante todo hay que percatarse bien de lo que quieren decir Iglesia y Estado, y más ahora en que tanto se asenderean lo de su mutua separación. Primero, Iglesia, Iglesia es -así se nos enseñó en el Catecismo- "la congregación de los fieles cristianos cuya cabeza es el Papa". De los fieles todos, no de los clérigos sólo, de los fieles, la inmensa mayoría de los cuales la forman laicos o legos. La Iglesia no es, pues, la clerecía, no es el cuerpo sacerdotal, no es lo que podríamos llamar la burocracia eclesiástica. Y hay iglesias sin clerecía.

Y si la Iglesia no puede confundirse con la clerecía, o reducirse a ésta, tampoco se puede confundir la nación con el Estado, o reducirse a éste. Si hay palabra ambigua es esta de Estado, con la que juegan federales, comunistas, anarquistas, sindicalistas y sus adversarios y contradictores. Estados o estamentos se llamó a las clases que estaban representadas en Cortes: nobleza, clero, burguesía, estado llano. Y Estado suele llamarse a la corporación de los que ejerce el Poder público, a la burocracia a que viven sujetos los llamados Gobiernos. De donde resulta que el Estado viene a ser a la nación lo que la clerecía a la Iglesia. Y preguntar si cabe nación sin Estado es como preguntar si cabe Iglesia sin clerecía, por mínimos que el Estado y la clerecía sean.

¡Sin clerecía! Ni para entrar en la Iglesia cristiana católica hace falta, ya que se entra por el bautismo, y puede bautizar cualquier hombre o mujer en uso de razón. Como en el sacramento del matrimonio son ministros los contrayentes, los que se casan. Dos casos del hondo laicismo de nuestra religión oficial y popular española. Laicismo que late en muchas de sus prácticas y en muchos de sus cultos. El feligrés y vecino de un pueblecillo se siente tal, feligrés y vecino, sin relación al párroco y al alcalde. La honda unidad del pueblecillo no depende de agentes de la autoridad, como son párroco y alcalde, sino de la autoridad misma, que es algo impersonal y colectivo, llámese parroquia o concejo.

¿Separar la Iglesia del Estado? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir separar la clerecía de la burocracia civil? ¿Que no cobre el clero de los impuestos públicos? ¿Que no sea el cura un funcionario civil? Entonces habría que ver si ello conviene a la nación y a la Iglesia, a la patria y a la religión. Porque eso de que la religión es asunto puramente individual o privado, resulta históricamente un error. La religión, sea lo que fuere, es un lazo entre individuos, un lazo que religa. Lo es la religión bolchevique y lo es la religión fajista. Fajismo, de fajo -palabra que tomamos hace siglos del italiano *fascio*, haz, las dos del latín *fascis*-, no es sino religionismo, bien que pagano. Es religionismo nacionalista o de Estado.

Cuando se discuta, pues, la separación de la Iglesia y del Estado; véase si conviene a la Iglesia, a la religión, y a la vez a la nación, a la patria, separar la clerecía de la burocracia civil; pero no se crea que el problema toca a lo hondo de la Iglesia y de la nación, de la religión y de la patria. La nación, la patria, se sostiene en un culto a la Historia, al pasado que no pasa, al pasado eterno, que es a la vez presente y porvenir eternos, que es eternidad, que es historia. El culto a los muertos, que no es culto a la muerte, sino a la inmortalidad: el culto a los muertos siempre vivos es el principio espiritual de continuidad humana, es la tradición siempre en progreso. Y esta Iglesia y esta nación son inseparables. El día en que de un rito o de otro, con agua o sin ella, se deje de bautizar al que entra en una comunidad nacional se habrá acabado la nación. Y esto aunque subsista el Estado, como un tumor que aun persiste sobre un cadáver. Y de esto nos enseña aquel hondo fenómeno histórico de laicización de una Iglesia nacional, que fue el movimiento husita -el de Juan Hus- en Bohemia, donde la nación, sacudiendo el Estado imperial austríaco, ha renacido como Checoslovaquia.

Católicos anticlericales conozco, pero también conozco clericales anticatólicos. Y sé que el problema ese de la separación de que se habla no es un problema religioso, sino económico. Y en cuanto a las Órdenes llamadas religiosas, no olvidemos que sus corporaciones se nutren por una especie de recluta malthusiana. Y que ahora tales corporaciones o comunidades, a favor de la persecución que las amaga, se encuentran en una especie de disolución íntima.

Miguel DE UNAMUNO

2.- "La cuestión religiosa"

"El Debate", 21 de julio de 1931.

Ha afirmado el señor Azaña en su último discurso que el problema religioso es un problema claro y hablado ya muchas veces. Algo así como un problema de superfluo análisis, cuya evidencia invita a preterirlo. Mas la claridad no ha aparecido ciertamente ninguna de las veces que de él se ha tratado en las esferas gubernamentales. El señor Alcalá Zamora dijo el sábado al referirse al proyecto de Constitución que el problema religioso había sido la "cuestión batallona" en el seno del Gobierno. Y conocidas son, por otra parte, las pugnas habidas no sólo dentro de la propia Comisión jurídica que redactó esta ponencia, sino en otros organismos oficiales, como Diputaciones y Municipios. Bastaría, en una palabra, recordar día por día los comentarios y discusiones surgidos en torno al problema en uno y otro sector de Prensa, recontar, de un lado, las protestas, las firmas, las comisiones, y de otro, los ataques, las críticas calumniosas, para deducir que no hay en la cuestión esa claridad que vislumbra en su fácil párrafo oratorio el ministro de la Guerra.

No está tan claro, y sus mismas palabras, mejor que otra cosa, lo confirman. Con vulgaridad impropia de cualquier espíritu culto, el señor Azaña reduce la Religión a "un problema íntimo de conciencia". Con inexactitud menos admisible todavía en un gobernante, afirma que el problema religioso "no es un problema político", ya que significa "una actitud del Estado frente a un cierto número de ciudadanos que visten hábito".

Evidentemente la Religión, en un sentido subjetivo, es un problema de conciencia. Pero no es menos elemental que la conciencia humana no está recluida en un círculo de inmanentismo psicológico. El más vulgar de los filósofos no osaría negar con la tranquilidad del señor Azaña que los actos de la conciencia son trascendentes de un modo esencial, y que por lo mismo la Religión pasa del culto interno al externo, del individual al colectivo y crea en la esfera práctica de su manifestación una moral definida, que socialmente hablando, establece no sólo relaciones recíprocas entre los hombres, sino normas de conducta para con el Estado, y aún de los mismos Estados entre sí. Así los seres religiosos imprimen carácter a las asociaciones colectivas y se lo imprimen de hecho al Estado, cuando las ideas y los sentimientos de una Religión son compartidos por la inmensa mayoría de los ciudadanos. Entonces es exigible al Estado proteger la conciencia religiosa y acomodar a ella sus leyes.

No debiera ignorar el señor Azaña cómo se ha impuesto este principio en la vida política contemporánea. Y no aludimos aquí a la protección que constitucionalmente se dispensa en casi todos los países a las confesiones

religiosas. Para velar por la paz social -precisamente porque el problema religioso no era de tan fácil solución ni de tan exiguo relieve, como prevé el señor Azaña- se ha estipulado en el mundo toda una larga serie de Tratados internacionales llamados de las Minorías, en los que fundamentalmente se han comprometido las Potencias a respetar y proteger a las minorías religiosas. Es más. A todos los países se exige como condición de ingreso en la Sociedad de las Naciones, y en beneficio de la paz mundial, una declaración de respeto y amparo para las minorías respectivas. Vea, pues, el citado ministro si ni como principio, ni como hecho se puede desligar de la política de un Estado el problema religioso. Y piense además si es "a fortiori" más digno de consideración en un país como el nuestro, en que la Religión católica es patrimonio, no de las minorías, sino de la inmensa mayoría de conciencias -aquí no hay minorías oprimidas- sobre las que, por otra parte, gravita el peso de una historia tradicionalmente religiosa.

Pero sería esto sólo examinar el problema en uno de sus aspectos. El ministro lo ha calificado también como "las relaciones del Estado con una potencia extranjera, que es la potencia católica romana". Es lamentable que no quiera saber que en el mundo puede existir, y de hecho existe, una sociedad con fines exclusivamente religiosos. Para un católico esta sociedad es de fundación divina, sobrenatural, perfecta, soberana en su esfera y aún superior por su fin al Estado. No se trata de una potencia extranjera, porque tiene los mismos súbditos que el Estado y abarca incluso en su finalidad universal a los súbditos de todos los países de la tierra. Es una sociedad espiritual que puede tener sus conflictos con los Estados meramente políticos. Y de ahí que sean precisos los convenios llamados "concordatos", que se han reconocido en todo el mundo civilizado. Concordatos sólo posibles cuando se reconoce la personalidad de la Iglesia y en los que se tratan problemas no relativos a un país extranjero, sino a los propios súbditos de la nación ligados a la potencia espiritual por los vínculos de su confesión religiosa.

El problema de la Religión sólo puede decirse que está claro en España cuando se habla de la católica, profesada por la inmensa mayoría de los españoles y ante la cual o caben los problemas religiosos o políticos de una diversidad de confesiones. Nadie, en efecto, siente oprimida la conciencia. Hasta ahora, desde que se decretó la libertad de cultos, una boda judía, más espectacular que otra cosa, ha sido la única manifestación confesional de un culto distinto.

Hubiérase expresado así el señor Azaña y hubiera pensado en un acuerdo con Roma, como piensan los católicos españoles, y habría dicho la verdad. Mas no es ése el espíritu de su discurso. Las "relaciones del Estado con sus propios súbditos" a que hace referencia, se traducen en la posibilidad de un desconocimiento de los derechos de la Iglesia. Y ello bastaría para crear entonces un verdadero problema religioso con graves repercusiones políticas; un estado de opresión religiosa, no de una mino-

ría, sino de la casi totalidad de un país. No son, pues, nada tranquilizadoras para la conciencia católica las palabras del ministro de la Guerra. Sería insigne locura añadir a los que ya hay, un nuevo y gravísimo problema de Gobierno. Pero nada es imposible en la política al uso. La España católica debe permanecer en pie, dispuesta a la defensa de su fe tradicional, y segura de que, una vez más, fracasará el Gobierno que pretenda atropellar los derechos de la Iglesia.

Porque como muy bien dijo el malogrado Ganivet: "España está invariablemente unida a su ideal religioso, y por mucho que se empuñen los sectarios en descatolizarla, no harán sino arañar un poco la corteza de la nación".

3. - Carta Pastoral del Episcopado sobre la situación religiosa presente y sobre los deberes que impone a los católicos.

25 de julio de 1931, *BOE de Toledo*, año 87, 14 de agosto de 1931, núm. 6, págs. 269-280.

Recogido en IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974*, págs. 135-150.

Venerables hermanos y muy amados hijos:

Indicadas las normas primordiales de respeto y obediencia a los poderes constituidos, que la Iglesia recomendó siempre para la conservación misma de la humana sociedad, y señalados los deberes que en orden a la elección de diputados para la formación de las Cortes Constituyentes incumbían a los católicos, creímos lo más oportuno esperar a que, aquietados los ánimos, se comenzasen a sentar establemente los principios reguladores de la vida nacional.

No hubiéramos, ciertamente, roto nuestro silencio, no obstante el vivísimo deseo de comunicarnos con vosotros en circunstancias tan extraordinarias y trascendentales, si no nos apremiara a hablar el deber de procurar el bien de vuestras almas. Callar por más tiempo sería dejar desamparados sacratísimos intereses de que el supremo Juez nos ha de pedir rigurosa cuenta.

Presentado ya, por una comisión jurídica asesora, al estudio, discusión y aprobación de las Cortes Constituyentes el proyecto de Constitución por la cual se ha de gobernar España en el nuevo régimen, es deber nuestro alocucionaros, con libertad y claridad apostólicas, sobre los puntos del referido proyecto que, directa o indirectamente, se refieren a nuestra santa Religión, exponiéndoos fidelísimamente la doctrina infalible de nuestra santa madre la Iglesia católica, que ninguno de sus hijos, bajo cualquier pretexto que sea, puede dejar de seguir, sin padecer naufragio en sus creencias y sin arriesgar su eterna salvación.

Porque, para decirlo desde el principio, el proyecto de Constitución tiene tan serios inconvenientes, que, si prevaleciera tal como ha sido presentado, crearía a la Iglesia en España una situación gravísima, que a todo trance es necesario precaver si queremos evitar perniciosísimos males, principalmente en el orden religioso y moral, aunque también trascendería al orden social y aun al mismo orden material.

EL LAICISMO DEL ESTADO

2. En primer lugar, implántase sin atenuaciones el absoluto laicismo del Estado, con sus diversas manifestaciones y consecuencias, que se concretan en el articulado en proposiciones explícitamente condenadas por la Iglesia y de las cuales haremos expresa mención.

En cuanto al laicismo, ved en qué términos lo condena y reprueba nuestro Santísimo Padre Pío XI: «Al disponer que todo el orbe católico rinda culto a Cristo Rey, tenemos por cierto que de esta manera aplicamos el principal remedio a la necesidad de los tiempos actuales y a la peste que inficiona a la humana sociedad. Y llamamos peste de nuestros tiempos al laicismo, con todos sus errores y dañados intentos: crimen que, como sabéis, venerables hermanos, no se ha fraguado y como madurado en un solo día, sino que de tiempo atrás estaba oculto en las entrañas de la sociedad ».

¹ *Encíclica Quas primas* (diciembre 1925).

Y, a mayor abundamiento, nos describe el Padre Santo «esta peste de nuestra época» con sus notas distintivas, que sin dificultad veréis retratadas en el proyecto de Constitución:

«Se comenzó, dice, por negar la soberanía de Cristo sobre las naciones; se negó a la Iglesia el derecho (consecuencia del derecho mismo de Cristo) de enseñar al género humano, de dar leyes, de gobernar los pueblos en orden a su bienaventuranza eterna. Luego, poco a poco, asimilaron la Religión cristiana a las falsas religiones y con el mayor descaro la colocaron al mismo nivel de éstas. La sometieron después a la autoridad civil y la entregaron, digámoslo así, al arbitrio de los príncipes y de los gobernantes. Algunos llegaron a intentar sustituir la religión divina por una religión puramente natural o por un simple sentimiento de religiosidad. Y aun no faltaron Estados que creyeron poder hacer caso omiso de Dios, y hacer consistir su religión en la inteligencia y en el olvido deliberada y voluntaria de Dios.»

¿Con cuánta razón afirma el Padre Santo que este crimen social, que esta peste monifera, no maduró en un día, sino que, después de haber estado oculto en las entrañas de la sociedad, se manifestó en nuestros días con frutos de maldición!

También, en España, la impiedad inoculó los gérmenes de esta peste del laicismo, cuyos frutos estamos viendo. He aquí cómo los enumera el Papa en la misma encíclica ya citada:

«Frutos de esta apostasía, dice, son las semillas de odio sembradas en todas partes; las envidias y rivalidades entre pueblos, que mantienen las contiendas internacionales y retratan aun actualmente la hora de una paz de reconciliación; las desenfrenadas ambiciones, que a menudo se cubren con la máscara del interés público y del amor patrio, con sus tristes consecuencias; las discordias civiles, un egoísmo ciego y desmesurado sin otro fin que las ventajas personales y el provecho privado. Frutos de esta apostasía son también: la paz familiar destruida por el olvido de los deberes y por el descuido de la conciencia; la unión y estabilidad de las familias, vacilantes; en una palabra, toda la sociedad perturbada y amenazada de ruina».

No juzgamos preciso, venerables hermanos y amados hijos, refutar cada uno de los errores doctrinales que dimanán del laicismo y que, o se expresan, o se insinúan en el proyecto de Constitución. Bastará daros a conocer su existencia y su condenación.

EL ORIGEN DEL PODER CIVIL (art. 1.º)

3. Dase por supuesto que la autoridad emana únicamente del pueblo; y de este postulado del ateísmo oficial, encarnado en las democracias sin Dios de nuestros días, derivanse terribles secuelas para el régimen de la sociedad; por lo cual no es extraño que la Iglesia, siguiendo las enseñanzas reveladas, tantas veces haya condenado esas perniciosas doctrinas.

«No hay potestad, dice el Apóstol¹ que no provenga de Dios, y Dios es quien estableció las que hay en el mundo. Por lo cual, quien desobedeciere a las potestades, a Dios desobedece».

¹ Rom 12,2.

En conformidad con esta doctrina, escribió Su Santidad León XIII: «Y como no puede subsistir ninguna sociedad sin que haya uno que a todos presida y mueva a cada uno al bien común con el mismo eficaz impulso, síguese que es necesaria a la sociedad civil humana una autoridad que la rija y gobierne, la cual, como la sociedad misma, nace de la naturaleza», por tanto, tiene por autor a Dios. De donde se infiere que la sociedad pública, por sí misma, no procede sino de Dios. Porque sólo Dios es el verdadera y supremo Señor de las cosas, al cual por fuerza ha de someterse y servir todo cuanto existe: de forma que cuantos tienen derecho de mandar no lo reciben sino de Dios, soberano Señor de todo lo creado».

Y no es menos explícito nuestro Santísimo Padre Pío XI al resumir las consecuencias del principio democrático del origen del poder: «Así, pues, dice, eliminado Dios de las leyes y de la sociedad, y admitido que la autoridad no proviene de Dios, sino de los hombres, vino a suceder que, además de quitarse a las leyes su verdadera y eficaz sanción, y destruirse los supremos principios de la justicia, que aun los filósofos gentiles, como Cicerón, entendían no poder comentarse sino en la ley eterna de Dios, se socavaron los fundamentos mismos de la sociedad, como quiera que ya no había causa para que unos tuviesen el derecho de mandar y otros la obligación de obedecer. Y así, torroso fue que la sociedad humana se convirtiese, como falta de sólido fundamento y defensa, y entregada a los partidos que contendían por el poder mirando a su propio provecho, no al de la patria».

EL ESTADO SIN RELIGIÓN (art. 8.º)

4. Después de veinte siglos en que nuestro divino Redentor pasó por las sociedades humanas, como por la tierra de Israel, «haciendo el bien»; después de haberlas sacado de la barbarie y de la ruina moral, social y aun política en que, hasta las más privilegiadas, se hallaban sumidas; después de haberles dado por medio de la Iglesia una civilización que las hizo grandes y envidiables, se ha vuelto a repetir la escena del pretorio, y los pueblos de hoy, que por tantos títulos son deudores de nuestro Señor, repiten inconscientes las mismas palabras que, hace casi dos mil años, pronunció el pueblo judío: «Quítale de en medio, no tenemos otro rey que el César»¹, o, como más explícitamente se dice en la parábola: «No queremos que éste reine sobre nosotros»².

Es imposible medir los males que los pueblos se acarrean al proscribe en sus códigos fundamentales el reinado social de Jesucristo. «Un diluvio de males, dice Su Santidad Pío XI³, ha venido sobre el mundo porque los más de los hombres han desterrado de la vida de la familia y de la vida social a Jesucristo y su santísima ley; pudiendo tenerse por cosa asentada que no volverá a resplandecer esperanza cierta de paz en los

¹ Encíclica *Inimicis Dei* (11 noviembre 1887). La misma doctrina aparece en un encíclica *Dispensamus alius*, de 29 de junio de 1881: «Por lo que toca al imperio o mundo político, reclamamos desde la Iglesia que viene de Dios, para establecer la subordinación de las Segundas Letras y los monumentos de la antigüedad cristiana, fuera de que no puede ninguna doctrina alguna al más conforme con la razón ni más conveniente al bienestar de los pueblos».

² Encíclica *Ubi arcano* (20 diciembre 1922).

³ Art. 10, 38.

⁴ Le 19, 25.

⁵ Le 19, 14.

⁶ Encíclica *Quasi primum* (diciembre 1925).

pueblos mientras cada uno de los hombres y las sociedades aparte de sí y rechacen el imperio de nuestro Salvador».

Asusta el pensar la responsabilidad en que incurren los supremos gobernantes y los legisladores que, al suprimir la religión del Estado, ciegan la fuente de la verdadera dicha y prosperidad de los pueblos. «No rehúsen los gobernantes de las naciones, decía el actual Pontífice, prestar por sí mismos y por el pueblo el público homenaje de reverencia y acatamiento debido al imperio de Jesucristo si quieren, conservando incólume su autoridad, fomentar y aumentar la prosperidad de la patria».

El ateísmo del Estado, tal como se proclama en el proyecto de Constitución, fue explícitamente condenado por Su Santidad Pío IX¹, al reprobar la doctrina que establece que «el mejor orden de la sociedad pública y el progreso civil exigen absolutamente que la sociedad humana se constituya y gobierne sin relación alguna a la Religión, como si ésta no existiese, o al menos sin hacer alguna diferencia entre la Religión verdadera y las falsas».

No puede, pues, admitirse por los católicos en modo alguno esa doctrina, conforme declaró León XIII con estas palabras: «No pueden las sociedades políticas obrar en conciencia como si Dios no existiese, ni volver la espalda a la Religión como si les fuese extraña, ni mirarla con esquivéz o desdén, como cosa inútil y embarazosa; ni, en fin, otorgar indiferentemente carta de ciudadanía a los varios cultos; antes bien, tiene el Estado político obligación de admitir enteramente y profesar sin rebozo *aquella ley y práctica del culto divino que el mismo Dios manifestó serle grata*. Honren, pues, los príncipes como cosa sagrada el santo nombre de Dios, y entre sus primeros y más gratos deberes cuenten el de favorecer con benevolencia y el de amparar con eficacia a la religión, poniéndola bajo el resguardo y vigilante autoridad de la ley, ni den paso ni abran la puerta a institución o decreto que ceda en detrimento suyo».

LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA Y DEL ESTADO

5. Con estas indicaciones, venerables hermanos y amados hijos, ya podéis formar claro y seguro juicio de la cuestión, tan traída y llevada hoy en escritos y discursos, de la separación de la Iglesia y del Estado.

Mas, para evitar toda sombra de duda, citaremos algunos documentos pontificios, sin comentario alguno, pues ellos de suyo son harto claros y elocuentes.

«No podemos esperar para la Iglesia y el Estado, escribió Su Santidad Gregorio XVI, mejores resultados de las tendencias de aquellos que pretenden separar la Iglesia y el Estado, y romper la mutua concordia entre el sacerdocio y el imperio; y notorio es el temor con que los fautores de la libertad deseen-

¹ *Enciclica Quanta cura* (8 diciembre 1864).

frenada miran esta concordia, que tan provechosa fue siempre a los intereses religiosos y civiles»¹⁰.

El soberano pontífice Pío IX condenó expresamente la doctrina que enseña que «la Iglesia debe separarse del Estado, y el Estado de la Iglesia», y que «en nuestros tiempos no conviene que la Religión católica sea tenida por única religión del Estado con exclusión de otros cualesquiera cultos»¹¹.

«Hemos de declarar, escribía a su vez el papa León XIII, que es *grande y pernicioso error* excluir a la Iglesia, que Dios mismo estableció, de la vida pública, de las leyes y del hogar doméstico. Una sociedad sin religión no puede ser mortificada; y sobradamente conocidos son los frutos de la llamada *moral civil*. La verdadera maestra de la virtud y la defensora de las buenas costumbres es la Iglesia de Jesucristo»¹².

Dignas de especial meditación son las siguientes palabras del santo papa Pío X: «La doctrina que proclama la conveniencia de la separación de la Iglesia y del Estado es *absolutamente falsa* y en gran manera *perniciosa*. En primer lugar, porque, tomando por fundamento que la sociedad civil en ninguna manera debe cuidarse de la Religión, infliere grave ofensa a Dios, autor y conservador no sólo de cada uno de los hombres, sino también de la misma sociedad; por lo cual debe tributársele culto no sólo privado, sino también público.

»Además, esta doctrina niega el orden sobrenatural, ya que asienta como norma de la acción del Estado únicamente la prosperidad de esta vida caduca, y desatiende por entero, como si fuera cosa ajena a sus fines, el verdadero fin último de todo hombre, que es la eterna bienaventuranza, destinada al linaje humano para después de esta breve vida terrena; cuando, por el contrario, el poder civil, lejos de poner obstáculos, debiera cooperar eficazmente a la consecución de aquel absoluto y supremo bien al que todas las cosas perecederas están subordinadas.

»Fuera de esto, la mencionada doctrina altera el orden por Dios establecido, el cual requiere la concordia de entrambas potestades, civil y religiosa. Porque, como las dos, cada una en su propio orden, ejerce autoridad sobre los mismos súbditos, por necesidad han de ofrecerse a menudo cuestiones cuyo conocimiento y resolución sea de la competencia de ambas. Mas si no hay unión entre la Iglesia y el Estado, semejantes casos serán frecuente semillero de dolorosos conflictos de una y otra parte, los cuales, oscureciendo el concepto de la verdad, turbarán la paz de los espíritus.

»Por último, esta doctrina acarrea grandes daños a la misma sociedad civil, porque es imposible que ésta florezca y aun subsista por largo tiempo si se desprecia la religión, que es guía segura y maestra suprema del hombre, a la vez que salva-

¹⁰ Enciclica *Miseri cordis*.

¹¹ *Syllabus*, proposiciones 53 y 77.

¹² Enciclica *Inimmortale Dei*.

guardia eficaz de sus derechos y de sus deberes»¹⁰.

Finalmente el Pontífice reinante, resumiendo en breve sentencia la doctrina de sus antecesores, condenó el régimen de separación de la Iglesia y del Estado con estas expresivas palabras: «A la luz de la fe católica, este régimen es tan disconforme con la doctrina de la Iglesia como con la naturaleza misma de la sociedad civil».

Ante declaraciones tan explícitas y terminantes, por demás será que algunos pretendan conciliar la doctrina de la Iglesia con esta otra de la separación de la Iglesia y del Estado, invocando hechos particulares que la Iglesia desapruueba, aunque, en evitación de males mayores, se vea forzada a tolerarlos. Véase, si no, lo que León XIII decía a los arzobispos y obispos de Norteamérica: «Es necesario desarraigar el error de los que a caso lleguen a creer que es situación apetecible la que la Iglesia tiene en América y de los que tal vez piensen que, a imitación de lo que ahí sucede, es lícita y aun conveniente la separación de la Iglesia y del Estado»¹¹.

A este propósito será muy útil recordar lo que el mismo Pontífice escribió a los católicos franceses en 1892: «Los católicos deben guardarse muy bien de defender la separación de la Iglesia y del Estado. Querer que el Estado se separe de la Iglesia sería querer, por lógica consecuencia, que la Iglesia quedase reducida a la libertad de vivir conforme al derecho común de todos los ciudadanos».

«Ciertamente ésta es la situación de la Iglesia en algunas naciones. Esta manera de vivir, al lado de muchos y graves inconvenientes, ofrece algunas ventajas, mayormente cuando el legislador, por feliz inconsecuencia, no deja de inspirarse, para gobernar, en los principios cristianos. Estas ventajas, aunque jamás podrán justificar el falso principio de la separación ni autorizar su defensa, todavía hacen tolerable un estado de cosas que, prácticamente, no es el peor de todos».

«Pero en Francia, nación católica por tradición y por la fe que aún profesan los más de sus hijos, no debe consentirse que se ponga a la Iglesia en esa precaria situación en que se ve precisada a vivir en otras partes. Y tanto menos es lícito a los católicos defender esa separación cuanto les son más conocidos los designios de quienes la desean, los cuales no se recatan de decir que esta separación significa la absoluta independencia de la legislación política de toda legislación religiosa; más aún: la total independencia del poder civil respecto de los intereses de la sociedad cristiana, es decir, de la Iglesia, y hasta la misma negación de su existencia... Para decirlo todo en una palabra, la aspiración de estos hombres es el regreso al paganismo: el Estado reconocerá a la Iglesia hasta el momen-

¹⁰ Enciclica *Vehementer* (11 febrero 1906).

¹¹ Carta *Longinquae* (16 enero 1899).

to en que se le antoje perseguirla»¹².

Por todo lo cual, Su Santidad Pío X hubo de fulminar aquella su memorable condenación de la ley de separación de la Iglesia y del Estado en la vecina República con estas gravísimas palabras, que queremos transcribir como resumen de cuanto dejamos dicho sobre este particular y como saludable advertencia para cuantos, en nuestra Patria, creen lícito defender una doctrina que traerá funestísimas consecuencias:

«Por lo tanto, cumpliendo nuestro apostólico deber de defender contra toda impugnación y conservar íntegros los derechos de la Iglesia, y haciendo uso de la suprema autoridad que de Dios hemos recibido, reprobamos y condenamos la ley recientemente publicada por la cual se establece la separación entre la Iglesia católica y la República francesa..., porque irroga gravísima ofensa a Dios, de quien oficialmente reniega al declarar que la República reniega de todo culto religioso; porque viola el derecho natural y de gentes y la fe debida a los pactos públicos; porque es contraria a la constitución divina de la Iglesia y a su libertad e inalienable derecho; porque es lesiva de la justicia conculcando el derecho de propiedad de la Iglesia, legítimamente adquirido por multitud de títulos y solemnemente reconocido por el Concordato; porque en fin, ofende gravísimamente a la dignidad de la Sede Apostólica, así como a nuestra persona, al Episcopado, al clero y a los fieles católicos de Francia»¹³.

LA SUBORDINACIÓN DE LA IGLESIA AL ESTADO (art. 8,12,21,31)

6. Funesta consecuencia práctica de considerar al Estado separado de la Iglesia es el equiparar a ésta con otras corporaciones que viven dentro del Estado y que de él reciben su vida jurídica, dependiendo, por consiguiente, del mismo en su actuación y en sus atribuciones.

Siendo la Iglesia sociedad perfecta, soberana e independiente y por su naturaleza, origen y fin de condición superior al Estado, ni fue nunca ni, aunque por suprema injusticia se intentase, podrá ser considerada como corporación subordinada al poder civil.

Con razón el papa Pío IX calificaba de *depravador error* el de aquellos que quieren someter la Iglesia al Estado¹⁴. Y León XIII, con su acostumbrada lucidez, escribía: «Otros, no pudiendo negar la existencia de la Iglesia, pretenden arrebatarle la naturaleza y derecho de sociedad perfecta y quisieran que su poder, despojado de toda autoridad legislativa, judicial y coercitiva, se limitase a dirigir, por medio de la exhortación y persuasión, a los que de buen grado y por propia voluntad a ella se sujetasen. Mas, quienes así opinan, pervierten la naturaleza de esta divina sociedad, coartan y extinguen su autoridad, su magisterio y toda su eficacia, o de tal forma exageran el poder civil, que intentan sojuzgar a la Iglesia, como una de las demás asociaciones libres de los ciudadanos, a la dependencia y dominación del Estado»¹⁵.

¹² Encíclica *Ad sollicitudinem*, dirigida al Clero y al pueblo francés en 16 de febrero de 1892.

¹³ Encíclica *Vehebundum* (11 febrero 1906).

¹⁴ Encíclica ya citada *Quanta cura*.

¹⁵ Encíclica *Libertas* (20 junio 1888).

Doctrina ésta que a ningún católico es lícito defender, pues, como asienta el mencionado Pontífice, «es cosa establecida por Dios que la Iglesia tenga todo aquello que corresponde a la naturaleza y derechos de una sociedad legítima, suprema y acabadamente perfecta».

De esta falsa doctrina de la subordinación de la Iglesia al Estado nacen otras funestas consecuencias, que son proclamadas en nuestros días como conquistas de la soberanía popular, y que no son sino extralimitaciones del poder civil.

Aludimos, principalmente, a los errores que a diario vemos propalados respecto de materias de trascendental importancia, como son: la educación de la niñez y de la juventud, la existencia y actuación de las órdenes religiosas, la independencia de los prelados y sacerdotes en su sagrado ministerio y la inmunidad eclesiástica.

Sobre todos estos puntos ha sido maravillosamente expuesta la doctrina católica en multitud de documentos pontificios, que debieran tener de continuo presentes los católicos para precaverse contra el deletéreo ambiente doctrinal que nos rodea. Para nuestro propósito bastará recordar las enseñanzas contenidas en el «Syllabus», de Pío IX.

Respecto de la enseñanza y educación de la juventud el Papa condena la doctrina que afirma que «todo el régimen de las escuelas públicas en donde se forma la juventud de algún Estado cristiano, a excepción, en algunos puntos de los seminarios episcopales, puede y debe ser de la atribución de la autoridad civil; de tal manera que a ninguna otra autoridad se reconozca derecho de intervenir en la disciplina de las escuelas, en el régimen de los estudios, en la colación de grados y la elección y aprobación de los maestros».

Asimismo condenó el Romano Pontífice esta proposición: «La mejor constitución de la sociedad civil exige que las escuelas populares, a cualquiera clase que pertenezcan los niños del pueblo que a ellas concurren, y en general los institutos públicos destinados a la enseñanza de las letras y a otros estudios superiores y a la educación de la juventud, estén exentos de toda autoridad, acción moderadora o injerencia de la Iglesia y que se sometan al pleno albedrío de la autoridad civil, a la voluntad de los gobernantes y según la norma de las opiniones corrientes en el siglo»¹¹.

No es tampoco nueva la animadversión de los enemigos de la Iglesia hacia las órdenes religiosas, pues ya Su Santidad Pío IX hubo de reprobear la opinión de los que juzgan «que deben abrogarse las leyes que pertenecen a la defensa del estado de las comunidades religiosas y de sus derechos y obligaciones», y que la autoridad civil «puede extinguir completamente las mismas comunidades religiosas»¹².

¹¹ Syllabus proposiciones 45 y 47. Hace también al caso la proposición 46, en la que se condena la doctrina que dice «que los católicos pueden aprobar aquella forma de educar a la juventud que está separada, disociada de la fe católica y de la pobreza de la Iglesia y mire solamente a la ciencia de las cosas naturales y de un modo exclusivo, o por lo menos primario, los fines de la vida civil y terrena».

¹² Syllabus proposición 53.

No es nuestro intento hacer en este lugar una defensa de las órdenes religiosas; pero, cuando menos, queremos dejar transcritas, como respuesta a la inicua propaganda que contra ellas se está haciendo, unas palabras de Pío IX que constituyen su mejor apología: «Por lo cual, decía, hablando del desenfreno de los tiempos modernos, esta clase de hombres libertinos persigue con odio cruel a las comunidades religiosas sin tener en cuenta los inestimables servicios que han prestado a la Religión, a la sociedad y a las letras. Al denigrarlas como inútiles y destituidas de todo derecho a la existencia, hácese eco de las calumnias de los herejes... La abolición de las órdenes religiosas tiende a destruir un género de vida que hace profesión pública de seguir los consejos evangélicos; un estado recomendado por la Iglesia como conforme con la doctrina apostólica; y, finalmente, ofende a los insignes fundadores que hoy veneramos en los altares y que, por inspiración de Dios, establecieron sus institutos»¹¹.

La libertad e independencia del *sagrado ministerio* hállese vindicada en la proposición 44 del «*Syllabus*», la cual declara inadmisibile la doctrina que sostiene que «la autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que tocan a la religión, costumbres y régimen espiritual; y que, por tanto, puede juzgar de las instrucciones que los pastores de la Iglesia suelen dar para dirigir las conciencias, según lo pide su mismo cargo, y aun dar normas para la administración de los sacramentos y sobre las disposiciones necesarias para recibirlos».

Finalmente defiende el Papa la *inmunidad eclesiástica*, contra la que expresamente atentan los artículos 12, IV y 21 del proyecto de Constitución en las proposiciones del *Syllabus* 30, 31 y 32, cuyas doctrinas expresamente confirma el *Código* vigente del Derecho Canónico, en sus cánones 120 y 121. Nos contentaremos con citar la proposición 30, según la cual ningún católico puede sostener que «la inmunidad de la Iglesia trae su origen del poder civil».

¡A cuán lastimosas consecuencias conduce el principio anticristiano, absurdo y disolvente, de que el Estado es la única fuente y origen de todos los derechos!

LAS LIBERTADES MODERNAS (arts. 12, 18, 31)

7. Brevisimas consideraciones bastarán para orientarnos acerca de las libertades llamadas «modernas», que son consideradas como la más preciada conquista de la Revolución francesa, y tenidas como intangible patrimonio de las democracias enemigas de la Iglesia.

Dimanan esas libertades de la cenagosa fuente de la Reforma protestante del siglo XVI, la cual, después de haber causado tantos trastornos a la Religión, vino a subvertir, siglos más tarde, a través del filosofismo, a la misma sociedad civil.

«En esta fuente, dice el papa León XIII, se ha de buscar el origen de los modernos principios de la libertad desenfrenada, ideados y promulgados en las grandes perturbaciones del

¹¹ Enciclica *Quanta cura*.

siglo último, como fundamento de un derecho nuevo, desconocido anteriormente y que está en disconformidad, no ya con el derecho cristiano, sino con el mismo derecho natural»¹¹.

Ese derecho nuevo no es más, según frase de Pío IX, que «la aplicación a la sociedad del absurdo e impío principio del naturalismo»¹².

Los nombres mismos que los Romanos Pontífices han dado a estas libertades son ya una elocuente condenación de las mismas. «Locura» las llamó Gregorio XVI; «libertades de perdición» las denominó Pío IX, con frase de San Agustín; y León XIII dijo de ellas que, «más que libertades, son libertinajes»¹³.

De estas libertades modernas trató amplisísimamente el citado sumo pontífice León XIII en su luminosa encíclica *Libertas*, en la cual, de antemano, refutó gravísimos errores que en diversos artículos del proyecto de Constitución se proclaman como otros tantos derechos del ciudadano. Séanos permitido transcribir, por lo menos, las siguientes líneas de aquel áureo documento: «De lo expuesto se sigue que *en modo alguno es lícito pedir, defender ni conceder* la libertad de pensar, de enseñar, de escribir y de cultos, como si estas facultades fuesen un derecho concedido al hombre por la naturaleza. Porque, si en verdad la naturaleza hubiera otorgado al hombre estas libertades, existiría el derecho de sustraerse a la soberanía de Dios y no habría ley capaz de regular la libertad humana».

Y con mayor claridad aún, si cabe, escribía, próximo ya a su muerte, al arzobispo de Bogotá: «De estos principios—habla de los principios del liberalismo—que la Santa Sede tantas veces ha condenado como falsos y opuestos a la doctrina católica, fluyen naturalmente, como de fuente cenagosa, las llamadas libertades modernas, conviene a saber: *la libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y la libertad de conciencia*»¹⁴.

Por especiales razones de oportunidad, recordaremos lo que en la citada encíclica se dice de la libertad de cultos. En el orden individual, la libertad de cultos «da a cada uno la facultad de profesar la religión que más le agrade o de no profesar ninguna. Lo cual es darles facultad para pervertir o abandonar una obligación santísima y tornarse al mal volviendo la espalda

¹¹ Encíclica *Immortale Dei*.

¹² Encíclica *Quanta cura*.

¹³ Gregorio XVI, encicl. *Mirari vos*; Pío IX, encicl. *Quanta cura*; León XIII, encíclica *Immortale Dei*.

¹⁴ Carta del Secretario de Estado Piñer, de 6 de abril de 1900.

al bien inmutable; mas esto no es libertad, sino depravación de la libertad y servidumbre del alma envilecida bajo el pecado».

La libertad de cultos aplicada a las naciones «pretende que el Estado no debe rendir a Dios ningún culto, y que ninguna religión debe tener trato de preferencia sobre las demás, sino que todas han de ser consideradas iguales, sin consideración alguna al pueblo, cuando éste profesa la Religión católica. Para lo cual sería preciso o que las sociedades civiles no tuvieran obligaciones para con Dios, o que impunemente puedan dejar de cumplirlas: cosas ambas iguales y manifiestamente falsas... La sociedad, en cuanto tal, debe reconocer a Dios por su autor y principio y, por consiguiente, debe rendir a su poder soberano y a su autoridad el homenaje de su culto. La justicia y la razón vedan al Estado el ser ateo, así como el guardar las mismas consideraciones y otorgar los mismos derechos a todas las llamadas religiones, lo cual equivale al ateísmo».

DEBERES DE LA HORA PRESENTE

8. De lo expuesto, venerables hermanos y amados hijos, se infiere con claridad meridiana la gravedad de la actual situación religiosa en nuestra Patria. Y de esta misma gravedad nacen deberes que ningún católico en conciencia puede eludir.

Nuestra primera obligación es mantenernos «firmes en la fe»¹⁹, unidos inseparablemente por el lazo de nuestras santas creencias, que a toda costa debemos conservar y defender, mirando siempre a la luz indeficiente de la verdad que resplandece en el Vaticano.

Ahora más que nunca hemos de guardar con filial sumisión aquella sapientísima norma que el papa León XIII daba a los obispos de Colombia: «Con todo afán han de procurar los obispos y los fieles que haya un solo pensamiento y un solo sentir en todo aquello que la Sede Apostólica haya determinado sin dejar lugar a diversidad de pareceres».

No ha sido otra la norma que hemos seguido en esta carta pastoral, en la que nada hemos querido decir de nuestra cosecha, sino que fielmente hemos reproducido las enseñanzas y aun las palabras mismas de los soberanos pontífices, oráculos de la verdad, que, a ejemplo del divino Maestro, «tienen palabras de vida eterna»²⁰.

Ellos, con suma prudencia y sabiduría, han guiado a la Iglesia a través de tiempos difíciles y peligrosos escollos. Guardianes vigilantes de la doctrina y de los derechos de la Iglesia, han procurado a la vez la paz y la concordia con los Estados. Y así estamos ciertos de que sucederá en la hora presente. «Siempre será para Nos, ha dicho Su Santidad Pío XI²¹, norma inviolable el mantener incólumes los derechos de la Iglesia; pero deseamos también vivir pacíficamente con todos, y dispuestos estamos a conceder, en cuanto nos sea lícito, todo aquello que, favoreciendo a la vida de la Iglesia, sirva a un tiempo para promover la concordia de los ánimos».

Graves son los peligros que os cercan en estos tiempos de iniquidad. «No os dejéis seducir», os diremos con el apóstol San Pablo: «las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Estad alerta y guardaos del pecado; porque entre nosotros hay hombres que no conocen a Dios; dígoles para confusión vuestra»²².

¹⁹ 1 Pe 3,9.

²¹ Jn 6,69.

²² Alocución *Gratum Nobis*, pronunciada en el Consistorio secreto de 23 de mayo de 1931.

²⁰ 1 Cor 13,33.

Evitad, en cuanto sea posible, el trato con los enemigos de la Iglesia, y, sobre todo, huid como de un áspid de la mala prensa, de esa prensa impía, blasfema y procaz, que es ariete demoledor de la fe, de las buenas costumbres y aun del orden y prosperidad de los pueblos.

A esta firmeza y unidad de doctrina hemos de unir constancia y fortaleza en la acción; que luchamos por intereses muy sagrados, y para alcanzar la corona de la victoria es preciso pelear denodadamente.

Los católicos que tienen representación en las Cortes Constituyentes están gravemente obligados en conciencia a propugnar, por cuantos medios legítimos estén en sus manos, los sacrosantos derechos de la Iglesia, preteridos en el proyecto de Constitución.

Los periódicos católicos, que tan abnegadamente y a costa de grandes sacrificios, sostienen enhiesta la bandera de la doctrina y de los derechos de Jesucristo, deben continuar combatiendo por la buena causa sin tregua y sin desmayo, con el resuelto apoyo de los buenos y con la bendición amplísima de la Iglesia, que contempla agradecida su abnegación y su valor.

Los hijos todos de la Iglesia católica en España, ante el riesgo a que están expuestas su fe y sus santas tradiciones, deben actuar en la vía pública con prudente decisión y energía, luchando incansablemente *pro aris et focis*, «por sus altares y sus hogares».

Pero no olvidemos que las armas más poderosas de la milicia cristiana fueron y serán siempre nuestras buenas obras unidas a la penitencia y a la oración. Se impone, pues, en esta hora de suprema trascendencia, una vida intensamente piadosa, apartada de las diversiones y pasatiempos del mundo; una santa austeridad de costumbres, con obras de penitencia y de propiciación; un retorno sincero a Jesucristo, nuestro Rey y soberano Dueño.

Y para que nuestros esfuerzos tengan mayor eficacia, os exhortamos muy encarecidamente a que acudáis a la mediación todopoderosa de la que fue siempre refugio y auxilio de los cristianos, de nuestra Madre la Virgen Inmaculada, por medio de la cual hemos de renovar nuestra consagración a su divino Hijo, como expresión de una voluntad firmísima de que El reine siempre en nuestras almas y en nuestra vida, y también en esta amada patria nuestra, que, si en lo pasado fue «la nación católica» por excelencia, no renunciará en lo venidero, así lo esperamos, a este título sobre todos glorioso.

Prenda de las gracias celestiales que de corazón imploramos para todos, venerables hermanos y muy amados hijos, sea la bendición pastoral que os damos en el nombre del † Padre y del † Hijo y del † Espíritu Santo.

En la fiesta del apóstol Santiago, Patrón de España, a 25 de julio de 1931.

4. Mensaje de la provincia eclesiástica de Sevilla a las Cortes constituyentes.

4 de septiembre de 1931.

Archivo de las Cortes Españolas. "Exposiciones pro Iglesia", legajo 539, 1931

ARZOBISPADO

DE
SEVILLA



Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Constituyentes

El Cardenal Arzobispo de Sevilla tiene el honor de elevar en nombre propio y en representación de los Obispos Sufregráneos por conducto de V.E.a las Cortes Constituyentes, reunidas actualmente en Madrid, el adjunto mensaje de respetuosa ruego y súplica, como Prelados de la Iglesia católica y como ciudadanos españoles; confiando sea benevolamente recibido y atendido por la Autoridad suprema legislativa de la Nación Española.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Sevilla 4 de Septiembre de 1931

AntONIO CARD. FLANDRIN
Arzobispo de Sevilla

Excmo. Sr. Presidente de las Cortes Constituyentes - Madrid -



ARZOBISPADO

DE
SEVILLA

A. Las Cortes Constituyentes

El Cardenal Arzobispo de Sevilla, en nombre propio y en representación delegada por los Rmos. Sres. Obispos Sufreagáneos de esta Provincia Eclesiástica, tiene el honor de elevar a las Cortes Constituyentes, el presente mensaje de respetuoso ruego y súplica, en demanda de que, en el Proyecto de Constitución que ha sido presentado por la Comisión Parlamentaria, y está ya discutiéndose en su totalidad, se modifiquen o eliminen algunos de sus artículos, que no dejan a salvo los derechos de la religión y de la santa Iglesia católica que profesan la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.

Gravísima es, bajo este respecto la letra y espíritu del artículo 3º del Proyecto de Constitución mencionado. En ese artículo se proclama lo que en lenguaje jurídico se denomina "Ateísmo del Estado". Cuando el Estado prescinde absolutamente de Dios y de la religión, deja incumplida la obligación máxima de acatamiento a la Divinidad, propia de todo ser jurídico y persona física y moral; se, infiere grave daño a la potestad suprema política, cuyo origen fundamental viene de Dios Autor y Señor soberano de pueblos y naciones, a quien rinden obediencia los hombres cuando se someten a las leyes y ordenaciones de las potestades humanas y temporales.

Los Obispos, deseamos que los ciudadanos obedezcan a éstas y a toda ley justa; por ésto mismo, pedimos que el Estado reconozca a Dios y no se divorcie de la religión.

Muy grave es también el artículo 24 del Proyecto. Si éste fuese aprobado por las Cortes Constituyentes, se causaría a la Iglesia católica lesión en sus más fundamentales y esenciales derechos, en su misma personalidad jurídica. La Iglesia católica no puede ser equiparada a cualesquiera otras Asociaciones funda-



das para fines particulares, profesionales, culturales, industriales, mercantiles y de otra clase, la Iglesia católica no la ha fundado los hombres; es divina. La fundó Jesucristo Dios con caracteres de sociedad necesaria, sobrenatural, universal, suprema en su orden y esfera propia y, como tal, superior a las Instituciones meramente humanas. Tiene derechos de sociedad perfecta y suprema sobrenatural inalienables que deben ser respetados; así como ella y sus Fieles nos esmeramos en reconocer los legítimos derechos de la sociedad civil y de sus Gobernantes y los deberes de obediencia debida a éstos en su propia esfera. Los Institutos de religiosos están aprobados y bendecidos por la legítima Autoridad de la Iglesia católica para fines de santificación personal de sus miembros y de los prójimos, en el ejercicio de obras de celo apostólico, de beneficencia, de caridad espiritual y corporal, de cultura religiosa y moral y de educación cristiana y cívica. Todos ellos merecen respeto y agradecimiento. No reciben subvenciones del Estado; y sin embargo ayudan a éste en el desenvolvimiento de sus funciones de asistencia social y de cultura y educación. Diera al mismo tiempo a la Iglesia y al Estado todo lo que tienda a privar a éste de la cooperación de las Congregaciones religiosas de uno u otro sexo en nuestra querida Nación española. Por lo mismo que la religión y la Iglesia católica promueven innumerables obras de cultura y beneficencia, necesitan, además de sus templos y lugares sagrados de oración y culto para la santificación y formación espiritual de sus miembros, edificios y bienes para el desarrollo y conservación de aquellos fines propios del fin para el que fue fundada la Iglesia y ésta ha fundado los Institutos religiosos. No puede estentarse contra estos bienes, sin que el derecho de propiedad, que como sociedad perfecta compete a la Iglesia, quede vulnerado. Por todo esto es de necesidad que se revisen y modifiquen los artículos 42 y 43 del repetido proyecto de Constitución.

Aunque en los artículos 23 y 38 del proyecto se reconoce a



la Iglesia el derecho de ejercer su misión docente, son tan graves las restricciones que en ellos se establecen que, si prevaleciese el texto proyectado, quedaría la Iglesia y los Ministros sagrados privados de los derechos que por disposición de Jesucristo tienen de predicar a todo el mundo sin distinción de lugares ni de oyentes; quedaría restringida y condicionada la legítima libertad de la Iglesia católica en su misión evangelizadora y en sus manifestaciones religiosas que son una de las formas de evangelizar y se lastimaría las conciencias de los católicos y el derecho de profesar su fe dando testimonio de ésta delante de los hombres y en todas partes.

Los Obispos de la santa Iglesia católica no podemos menos de deplorar que en el Proyecto de Constitución se haya incluido el artículo 41. Ese artículo, que establece la disolución del vínculo matrimonial, es diametralmente opuesto a la institución divina del sacramento del matrimonio, que es por su naturaleza indisoluble; es opuesto a la necesaria estabilidad de la familia, y daña no menos que a los hijos a los consortes que legítimamente y voluntariamente contraen y se unen en la sociedad conyugal. Abriremos la esperanza de que las Cortes Constituyentes, velando por el bien general, en la discusión del artículo 41, reformen ese artículo.

No hemos de ser prolijos en esta serie de peticiones los Obispos; pero, en manera alguna podemos dejar de llamar la atención de las Cortes Constituyentes sobre el artículo 46 del Proyecto de Constitución. Obligado está todo Estado a proporcionar a los ciudadanos medios de verdadera cultura y facilitar la enseñanza primaria a todos ellos. El cumplimiento de esta obligación no exige imponer la enseñanza laica ni la escuela única; inferioríase grave daño a los ciudadanos si la enseñanza libre, es decir, el ejercicio de la función docente y el derecho a abrir escuelas primarias y superiores por personas competentes para esta función, quedase prohibida en la Constitución. Todavía es mayor la lesión del derecho si no se permite a la Iglesia católica el

ejercicio del derecho nativo en ésta de abrir escuelas de todo orden y colegios de educación y enseñanza de la niñez y de la juventud. La ciencia y la fé católica mutuamente se coordinan y se armonizan. La Iglesia católica ha sido y es en todo el mundo luz de las inteligencias en todos los ramos de la cultura y de la enseñanza. Véase la manera de armonizar los derechos de la Iglesia y los del Estado y los derechos legítimos de los padres de familia sobre sus hijos y la educación de éstos, en tal forma que el texto definitivo de la Constitución deje a salvo todos los derechos legítimos, que tienen su raíz en el derecho natural y en el Evangelio. Procurese a toda costa que la enseñanza religiosa sea parte integrante y necesaria de toda escuela; mayormente viendo como es la Nación española formada en su inmensa mayoría por ciudadanos que profesan la religión católica. En nada perjudica la enseñanza religiosa en las escuelas; antes bien, con ésta se educa la verdadera conciencia ciudadana y se forman los pueblos grandes.

Fundados en las expuestas consideraciones el Cardenal Arzobispo de Sevilla y los demás Obispos de las diócesis Safragáneas de esta Provincia Eclesiástica respetuosamente ruegan a las Cortes Constituyentes actualmente reunidas en Madrid que no acepten ni aprueben aquellos artículos del Proyecto de Constitución presentado por la Comisión Parlamentaria que están en oposición con los sagrados derechos de la religión y de la Iglesia católica; y por consiguiente piden que no se decrete la separación de la Iglesia y el Estado con la cual se perjudicaría a la religión y al bienestar nacional. Ruegan por último a la Cortes Constituyentes que en curso de las deliberaciones sobre la futura Constitución fundamental del Estado español nada se legisle en relación con la religión y la Iglesia católica sino de acuerdo con la Santa Sede, que es la Suprema Autoridad establecida por Dios en materias religiosas para todo el mundo.

Lo pedimos en nombre de la justicia y del derecho, en nom-

ARZOBISPADO
DE
SEVILLA



bre del bien general de España cuya inmensa mayoría de ciudadanos profesa la religión católica, en nombre de los altos fundamentos morales y sociales de la paz pública.

Sevilla 4 de Septiembre de 1931

Por sí y con autorización y delegación de los
Obispos Sufragáneos.

Juan José Cárdenas
Arzobispo de Sevilla

5.- 1 de julio de 1937. Episcopado español a los obispos de todo el mundo.

Recogido en IRIBARREN, Jesús, *Documentos colectivos del Episcopado español, 1870-1974*, págs. 219-242.

Venerables hermanos:

1. Razón de este documento

Suelen los pueblos católicos ayudarse mutuamente en días de tribulación, en cumplimiento de la ley de caridad y de fraternidad que une en un Cuerpo místico a cuantos comulgamos en el pensamiento y amor de Jesucristo. Órgano natural de este intercambio espiritual son los obispos, a quienes puso el Espíritu Santo para regir la Iglesia de Dios. España, que pasa una de las más grandes tribulaciones de su historia, ha recibido múltiples manifestaciones de afecto y condolencia del Episcopado católico extranjero, ya en mensajes colectivos, ya de muchos obispos en particular. Y el Episcopado español, tan terriblemente probado en sus miembros, en sus sacerdotes y en sus iglesias, quiere hoy corresponder con este documento colectivo a la gran caridad que se nos ha manifestado de todos los puntos de la tierra.

Nuestro país sufre un trastorno profundo; no es sólo una guerra civil cuentísima la que nos llena de tribulación, es una conmoción tremenda la que sacude los mismos cimientos de la vida social y ha puesto en peligro hasta nuestra existencia como nación. Vosotros lo habéis comprendido, venerables hermanos, y «vuestras palabras y vuestro corazón se nos han abierto», diremos con el Apóstol, dejándonos ver las entrañas de vuestra caridad para con nuestra patria querida. Que Dios os lo premie.

Pero con nuestra gratitud, venerables hermanos, debemos manifestaros nuestro dolor por el desconocimiento de la verdad de lo que en España ocurre. Es un hecho, que nos consta por documentación copiosa, que el pensamiento de un gran sector de opinión extranjera está disociado de la realidad de los hechos ocurridos en nuestro país. Causas de este extravío podrían ser el espíritu anticristiano, que ha visto en la contienda de España una partida decisiva en pro o en contra de la religión de Jesucristo y la civilización cristiana; la corriente opuesta de doctrinas políticas que aspiran a la hegemonía del mundo; la labor tendenciosa de fuerzas internacionales ocultas; la antipatria, que se ha valido de españoles ilusos que, amparándose en el nombre de católicos, han causado enorme daño a la verdadera España. Y lo que más nos duele es que una buena parte de la prensa católica extranjera haya contribuido a esta desviación mental, que podría ser funesta para los sacratísimos intereses que se ventilan en nuestra patria.

Casi todos los obispos que suscribimos esa carta hemos procurado dar a su tiempo la nota justa del sentido de la guerra. Agradecemos a la prensa católica extranjera el haber hecho suya la verdad de nuestras declaraciones, como lamentamos que algunos periódicos y revistas que debieron ser ejemplo de respeto y acatamiento a la voz de los preladados de la Iglesia las hayan combatido o tergiversado.

Ello obliga al Episcopado español a dirigirse colectivamente a los hermanos de todo el mundo con el único propósito de que resplandezca la verdad, oscurecida por ligereza o por malicia, y nos ayude a difundirla. Se trata de un punto gravísimo en que se conjugan no los intereses políticos de una nación, sino los mismos fundamentos providenciales de la vida social: la religión, la justicia, la autoridad y la libertad de los ciudadanos.

Cumplimos con ello, junto con nuestro oficio pastoral—que importa ante todo el magisterio y la verdad—, con un triple deber de religión, de patriotismo y de humanidad. De religión, porque, testigos de las grandes prevaricaciones y heroísmos que han tenido por escena nuestro país, podemos ofrecer al mundo lecciones y ejemplos que cosen dentro de nuestro ministerio episcopal y que habrán de ser provechosos a todo el mundo; de patriotismo, porque el obispo es el primer obligado a defender el buen nombre de su patria, *terra patrum*, por cuanto fueron nuestros venerables predecesores los que formaron la nuestra, tan cristiana como es, «engendrando a sus hijos para Jesucristo por la predicación del Evangelio»; de humanidad, porque, ya que Dios ha permitido que fuese nuestro país el lugar de experimentación de ideas y procedimientos que aspiran a conquistar el mundo, quisiéramos que el daño se redujese al ámbito de nuestra patria y se salvaran de la ruina las demás naciones.

2. Naturaleza de la carta

Este documento no será la demostración de una tesis, sino la simple exposición, a grandes líneas, de los hechos que caracterizan nuestra guerra y le dan su fisonomía histórica. La guerra de España es producto de la pugna de ideologías irreconciliables; en sus mismos orígenes se hallan envueltas gravísimas cuestiones de orden moral y jurídico, religioso e histórico. No sería difícil el desarrollo de puntos fundamentales de doctrina aplicada a nuestro momento actual. Se ha hecho ya copiosamente, hasta por algunos de los hermanos que suscriben esta carta. Pero estamos en tiempos de positivismo calculador y frío, y especialmente cuando se trata de hechos de tal relieve histórico como se han producido en esta guerra, lo que se quiere—se nos ha requerido cien veces desde el extranjero en este sentido—son hechos vivos y palpantes que, por afirmación o contraposición, den la verdad simple y justa.

Por esto tiene este escrito un carácter asertivo y categórico de orden empírico. Y ello en sus dos aspectos: el de juicio

que solidariamente formulamos sobre la estimación legítima de los hechos y el de afirmación *per oppositum*, con que deshaecemos, con toda caridad, las afirmaciones falsas o las interpretaciones torcidas con que haya podido falsearse la historia de estos años de la vida de España.

3. Nuestra posición ante la guerra

Conste antes que todo, ya que la guerra pudo preverse desde que se atacó ruda e inconsideradamente al espíritu nacional, que el Episcopado español ha dado, desde el año 1931, altísimos ejemplos de prudencia apostólica y ciudadana. Ajustándose a la tradición de la Iglesia y siguiendo las normas de la Santa Sede, se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos, con quienes se esforzó en colaborar para el bien común. Y a pesar de los repetidos agravios a personas, cosas y derechos de la Iglesia, no rompió su propósito de no alterar el régimen de concordia de tiempo atrás establecido. *Etiám dyscolis*: A los vejámenes respondimos siempre con el ejemplo de la sumisión leal en lo que podíamos; con la protesta grave, razonada y apostólica cuando debíamos; con la exhortación sincera que hicimos reiteradamente a nuestro pueblo católico a la sumisión legítima, a la oración, a la paciencia y a la paz. Y el pueblo católico nos secundó, siendo nuestra intervención valioso factor de concordia nacional en momentos de honda conmoción social y política.

Al estallar la guerra hemos lamentado el doloroso hecho más que nadie, porque ella es siempre un mal gravísimo, que muchas veces no compensa bienes problemáticos, y porque nuestra misión es de reconciliación y de paz: *Ei in terra pax*. Desde sus comienzos hemos tenido las manos levantadas al cielo para que cese. Y en estos momentos repetimos las palabras de Pío XI, cuando el recelo mutuo de las grandes potencias iba a desencadenar otra guerra sobre Europa: «Nos invocamos la paz, bendecimos la paz, rogamos por la paz». Dios nos es testigo de los esfuerzos que hemos hecho para aminorar los estragos que siempre son su cortejo.

Con nuestros votos de paz juntamos nuestro perdón generoso para nuestros perseguidores y nuestros sentimientos de caridad para todos. Y decimos sobre los campos de batalla y a nuestros hijos de uno y otro bando la palabra del Apóstol: *El Señor sabe cuánto os amamos a todos en las entrañas de Jesucristo*.

Pero la paz es la «tranquilidad del orden divino, nacional, social e individual, que asegura a cada cual su lugar y le da

lo que le es debido, colocando la gloria de Dios en la cumbre de todos los deberes y haciendo derivar de su amor el servicio fraternal de todos». Y es tal la condición humana y tal el orden de la Providencia—sin que hasta ahora haya sido posible hallarle sustitutivo—, que siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad, es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el juicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz. Por esto la Iglesia, aun siendo hija del Príncipe de la paz, bendice los emblemas de la guerra, ha fundado las órdenes militares y ha organizado cruzadas contra los enemigos de la fe.

No es éste nuestro caso. La Iglesia no ha querido esta guerra ni la buscó, y no creemos necesario vindicarla de la nota de beligerante con que en periódicos extranjeros se ha censurado a la Iglesia en España. Ciertamente miles de hijos suyos, obedeciendo a los dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, se alzaron en armas para salvar los principios de religión y justicia cristianas que secularmente habían informado la vida de la nación; pero quien la acuse de haber provocado esta guerra o de haber conspirado para ella, y aun de no haber hecho cuanto en su mano estuvo para evitarla, desconoce o falsea la realidad.

Esta es la posición del Episcopado español, de la Iglesia española, frente al hecho de la guerra actual. Se la veió y persiguió antes de que estallara; ha sido víctima principal de la furia de una de las partes contendientes, y no ha cesado de trabajar con su plegaria, con sus exhortaciones, con su influencia para aminorar sus daños y abreviar los días de prueba.

Y si hoy, colectivamente, formulamos nuestro veredicto en la cuestión complejísima de la guerra de España, es, primero, porque, aun cuando la guerra fuese de carácter político o social, ha sido tan grave su repercusión de orden religioso y ha aparecido tan claro desde sus comienzos que una de las partes beligerantes iba a la eliminación de la religión católica en España, que nosotros, obispos católicos, no podíamos inhibirnos sin dejar abandonados los intereses de nuestro Señor Jesucristo y sin incurrir en el tremendo apelativo de *canes muti* con que el profeta censura a quienes, debiendo hablar, callan ante la injusticia; y luego, porque la posición de la Iglesia española ante la lucha, es decir, del Episcopado español, ha sido torcidamente interpretada en el extranjero; mientras un político muy destacado en una revista católica extranjera la achaca poco menos que a la ofuscación mental de los arzobispos españoles, a los que califica de ancianos que deben cuanto son al régi-

men monárquico y que han arrastrado por razones de disciplina y obediencia a los demás obispos en un sentido favorable al movimiento nacional, otros nos acusan de temerarios al exponer a las contingencias de un régimen absorbente y tiránico el orden espiritual de la Iglesia, cuya libertad tenemos obligación de defender.

No; esta libertad la reclamamos, ante todo, para el ejercicio de nuestro ministerio; de ella arrancan todas las libertades que vindicamos para la Iglesia. Y, en virtud de ella, no nos hemos atado con nadie—personas, poderes o instituciones—, aun cuando agradezcamos el amparo de quienes han podido librarnos del enemigo que quiso perdernos y estremos dispuestos a colaborar, como obispos y españoles, con quienes se esfuerzan en reinstaurar en España un régimen de paz y de justicia. Ningún poder político podrá decir que nos hayamos apartado de esta línea en ningún tiempo.

4. El quinquenio que precedió a la guerra

Afirmamos, ante todo, que esta guerra la ha acarreado la temeridad, los errores, tal vez la malicia o la cobardía de quienes hubiesen podido evitarla gobernando la nación según justicia.

Dejando otras causas de menor eficiencia, fueron los legisladores de 1931, y luego el poder ejecutivo del Estado con sus prácticas de gobierno, los que se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional, y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país. La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional. Anulados los derechos de Dios y vejada la Iglesia, quedaba nuestra sociedad enervada, en el orden legal, en lo que tiene de más sustantivo la vida social, que es la religión. El pueblo español, que en su mayor parte mantenía viva la fe de sus mayores, recibió con paciencia invicta los reiterados agravios hechos a su conciencia por leyes inicuas; pero la temeridad de sus gobernantes había puesto en el alma nacional, junto con el agravio, un factor de repudio y de protesta contra un poder social que había faltado a la justicia más fundamental, que es la que se debe a Dios y a la conciencia de los ciudadanos.

Junto con ello, la autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la plebe sus poderes. Los incendios de los templos de Madrid y provincias en mayo de 1931, las revueltas de octubre del año 1934, especialmente en Cataluña y Asturias,

donde reinó la anarquía durante dos semanas. el período turbulento que corre de febrero a julio de 1936, durante el cual fueron destruidas o profanadas 411 iglesias y se cometieron cerca de 3 000 atentados graves de carácter político y social, presagaban la ruina total de la autoridad pública, que se vio sucumbir con frecuencia a la fuerza de poderes ocultos que mediatizaban sus funciones.

Nuestro régimen político de libertad democrática se desquició, por arbitrariedad de la autoridad del Estado y por coacción gubernamental que trastocó la voluntad popular, constituyendo una máquina política en pugna con la mayoría de la nación, dándose el caso, en las últimas elecciones parlamentarias, febrero de 1936, de que, con más de medio millón de votos de exceso sobre las izquierdas, obtuviesen las derechas 118 diputados menos que el Frente Popular, por haberse anulado caprichosamente las actas de provincias enteras, viciándose así en su origen la legitimidad del Parlamento.

Y a medida que se descomponía nuestro pueblo por la relajación de los vínculos sociales y se desangraba nuestra economía y se alteraba sin tino el ritmo del trabajo y se debilitaba maliciosamente la fuerza de las instituciones de defensa social, otro pueblo poderoso, Rusia, empalmando con los comunistas de acá, por medio del teatro y el cine con ritos y costumbres exóticas, por la fascinación intelectual y el soborno material, preparaba el espíritu popular para el estallido de la revolución, que se señalaba casi a plazo fijo.

El 27 de febrero de 1936, a raíz del triunfo del Frente Popular, la Komintern rusa decretaba la revolución española y la financiaba con exorbitantes cantidades. El 1 de mayo siguiente centenares de jóvenes postulaban públicamente en Madrid «para bombas y pistolas, pólvora y dinamita para la próxima revolución». El 16 del mismo mes se reunían en la Casa del Pueblo de Valencia representantes de la U. R. S. S. con delegados españoles de la III Internacional, resolviendo, en el 9.º de sus acuerdos: «Encargar a uno de los radios de Madrid, el designado con el número 25, integrado por agentes de policía en activo, la eliminación de los personajes políticos y militares destinados a jugar un papel de interés en la contrarrevolución». Entretanto, desde Madrid a las aldeas más remotas aprendían las milicias revolucionarias la instrucción militar y se las armaba copiosamente, hasta el punto de que, al estallar la guerra, contaban con 150.000 soldados de asalto y 100.000 de resistencia.

Os parecerá, venerables hermanos, impropia de un documento episcopal la enumeración de estos hechos. Hemos querido sustituirlos a las razones de derecho político que pudiesen justificar un movimiento nacional de resistencia. Sin Dios, que debe estar en el fundamento y a la cima de la vida social; sin autoridad, a la que nada puede sustituir en sus funciones de creadora del orden y mantenedora del derecho ciudadano; con la fuerza material al servicio de los sin-Dios ni conciencia, manejados por agentes poderosos de orden internacional, España debía deslizarse hacia la anarquía, que es lo contrario del bien común y de la justicia y orden social. Aquí han venido a parar las regiones españolas en que la revolución marxista ha seguido su curso inicial.

Estos son los hechos. Corréjense con la doctrina de Santo Tomás sobre el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza y talte cada cual en justo juicio. Nadie podrá negar que, al tiempo de estallar el conflicto, la misma existencia del bien común—la religión, la justicia, la paz—estaba gravemente comprometida; y que el conjunto de las autoridades sociales y de los hombres prudentes que constituyen el pueblo en su organización natural y en sus mejores elementos, reconocían el público peligro. Cuanto a la tercera condición que requiere el Ángelico, de la convicción de los hombres prudentes sobre la probabilidad del éxito, la dejamos al juicio de la historia: los hechos, hasta ahora, no le son contrarios.

Respondemos a un reparo que una revista extranjera concreta al hecho de los sacerdotes asesinados y que podría extenderse a todos los que constituyen este inmenso trastorno social que ha sufrido España. Se refiere a la posibilidad de que, de no haberse producido el alzamiento, no se hubiese alterado la paz pública: «A pesar de los desmanes de los rojos—leemos—queda en pie la verdad de que si Franco no se hubiese alzado, los centenares o millares de sacerdotes que han sido asesinados hubiesen conservado la vida y hubiesen continuado haciendo en las almas la obra de Dios». No podemos suscribir esta afirmación, testigos como somos de la situación de España al estallar el conflicto. La verdad es lo contrario; porque es cosa documentalmente probada que en el minucioso proyecto de la revolución marxista que se gestaba, y que habría estallado en todo el país si en gran parte de él no lo hubiese impedido el movimiento cívico-militar, estaba ordenado el exterminio del clero católico, como el de los derechistas calificados, como la sovieterización de las industrias y la implantación del comunismo. Era por enero último cuando un dirigente anarquista decía al mundo

por radio: «Hay que decir las cosas tal y como son, y la verdad no es otra que la de que los militares se nos adelantaron para evitar que llegáramos a desencadenar la revolución».

Quede, pues, asentado, como primera afirmación de este escrito, que un quinquenio de continuos atropellos de los súbditos españoles en el orden religioso y social puso en gravísimo peligro la existencia misma del bien público y produjo enorme tensión en el espíritu del pueblo español; que estaba en la conciencia nacional que, agotados ya los medios legales, no había más recurso que el de la fuerza para sostener el orden y la paz; que poderes extraños a la autoridad tenida por legítima decidieron subvertir el orden constituido e implantar violentamente el comunismo; y, por fin, que por lógica fatal de los hechos no le quedaba a España más que esta alternativa: o sucumbir en la embestida definitiva del comunismo destructor, ya planeada y decretada, como ha ocurrido en las regiones donde no triunfó el movimiento nacional, o intentar, en esfuerzo titánico de resistencia, librarse del terrible enemigo y salvar los principios fundamentales de su vida social y de sus características nacionales.

5. El alzamiento militar y la revolución comunista

El 18 de julio del año pasado se realizó el alzamiento militar y estalló la guerra, que aún dura. Pero nótese, primero, que la sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, sin colaboración con el pueblo sano, que se incorporó en grandes masas al movimiento, que, por ello, debe calificarse de cívico-militar; y segundo, que este movimiento y la revolución comunista son dos hechos que no pueden separarse si se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la guerra. Coincidentes en el mismo momento inicial del choque, marcan desde el principio la división profunda de las dos Españas que se batirán en los campos de batalla.

Aún hay más: el movimiento no se produjo sin que los que lo iniciaron intimaran previamente a los poderes públicos a oponerse por los recursos legales a la revolución marxista inminente. La tentativa fue ineficaz y estalló el conflicto, chocando las fuerzas cívico-militares, desde el primer instante, no tanto con las fuerzas gubernamentales que intentarían reducirlo como con la furia desencadenada de unas milicias populares que, al amparo, por lo menos, de la pasividad gubernamental, encuadrándose en los mandos oficiales del ejército y utilizando, a más del que ilegítimamente poseían, el armamento de los par-

ques del Estado, se arrojaron como avalancha destructora contra todo lo que constituye un sostén en la sociedad.

Esta es la característica de la reacción obrada en el campo gubernamental contra el alzamiento cívico-militar. Es, ciertamente, un contraataque por parte de las fuerzas fieles al Gobierno; pero es, ante todo, una lucha en comandita con las fuerzas anárquicas que se sumaron a ellas y que con ellas pelearán juntas hasta el fin de la guerra. Rusia, lo sabe todo el mundo, se injertó en el ejército gubernamental tomando parte en sus mandos, y fue a fondo, aunque conservándose la apariencia del Gobierno del Frente Popular, a la implantación del régimen comunista por la subversión del orden social establecido. Al juzgar de la legitimidad del movimiento nacional, no podrá prescindirse de la intervención, por la parte contraria, de estas «milicias anárquicas, incontrolables»—es palabra de un ministro del Gobierno de Madrid—, cuyo poder hubiese prevalecido sobre la nación.

Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada—lo era de la nación española—, la revolución comunista, aliada de los ejércitos del Gobierno, fue, sobre todo, antidiuina. Se cerraba así el ciclo de la legislación laica de la Constitución de 1931 con la destrucción de cuanto era cosa de Dios. Salvamos toda intervención personal de quienes no han militado conscientemente bajo este signo; sólo trazamos la trayectoria general de los hechos.

Por esto se produjo en el alma nacional una reacción de tipo religioso correspondiente a la acción nihilista y destructora de los sin-Dios. Y España quedó dividida en dos grandes bandos militantes; cada uno de ellos fue como el aglutinante de cada una de las dos tendencias profundamente populares; y a su alrededor, y colaborando con ellos, polarizaron, en forma de milicias voluntarias y de asistencias y servicios de retaguardia, las fuerzas opuestas que tenían dividida la nación.

La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La lucha blanca de los comicios de febrero de 1936, en que la falta de conciencia política del Gobierno nacional dio arbitrariamente a las fuerzas revolucionarias un triunfo que no habían logrado en las urnas, se transformó, por la contienda cívico-militar, en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que salió a la defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización

de España, con todos sus factores, por la novísima «civilización» de los soviets rusos.

Las ulteriores complicaciones de la guerra no han variado más que accidentalmente su carácter: el internacionalismo comunista ha corrido al territorio español en ayuda del ejército y pueblo marxista; como, por la natural exigencia de la defensa y por consideraciones de carácter internacional, han venido en ayuda de la España tradicional armas y hombres de otros países extranjeros. Pero los núcleos nacionales siguen igual, aunque la contienda, siendo profundamente popular, haya llegado a revestir caracteres de lucha internacional.

Por esto, observadores perspicaces han podido escribir estas palabras sobre nuestra guerra: «Es una carrera de velocidad entre el bolchevismo y la civilización cristiana». «Una etapa nueva y tal vez decisiva en la lucha entablada entre la revolución y el orden». «Una lucha internacional en un campo de batalla nacional; el comunismo libra en la Península una formidable batalla, de la que depende la suerte de Europa».

No hemos hecho más que un esbozo histórico, del que deriva esta afirmación: El alzamiento cívico-militar fue en su origen un movimiento nacional de defensa de los principios fundamentales de toda sociedad civilizada; en su desarrollo, lo ha sido contra la anarquía coligada con las fuerzas al servicio de un gobierno que no supo o no quiso tutelar aquellos principios.

Consecuencia de esta afirmación son las conclusiones siguientes:

1.º Que la Iglesia, a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedían su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos, como tal vez no lo haya sufrido institución alguna en la historia; de la otra, cualesquiera que fuesen los humanos defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu español y cristiano.

2.º La Iglesia, con ello, no ha podido hacerse solidaria de conductas, tendencias o intenciones que, en el presente o en el porvenir, pudiesen desnaturalizar la noble fisonomía del movimiento nacional, en su origen, manifestaciones y fines.

3.º Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España y evitar su ruina definitiva; y el sentido

religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir a la impotencia a los enemigos de Dios y como la garantía de la continuidad de su fe y de la práctica de su religión.

Hoy por hoy no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social.

6. Características de la revolución comunista

Puesta en marcha la revolución comunista, conviene puntualizar sus caracteres. Nos ceñimos a las siguientes afirmaciones, que derivan del estudio de hechos plenamente probados, muchos de los cuales constan en informaciones de toda garantía, descriptivas y gráficas, que tenemos a la vista. Notamos que apenas hay información debidamente autorizada más que del territorio liberado del dominio comunista. Quedan todavía bajo las armas del ejército rojo, en todo o parte, varias provincias: se tiene aun escaso conocimiento de los desmanes cometidos en ellas, los más copiosos y graves.

Enjuiciando globalmente los excesos de la revolución comunista española, afirmamos que en la historia de los pueblos occidentales no se conoce un fenómeno igual de vesania colectiva, ni un cúmulo semejante, producido en pocas semanas, de atentados cometidos contra los derechos fundamentales de Dios, de la sociedad y de la persona humana. Ni sería fácil, recogiendo los hechos análogos y ajustando sus trazos característicos para la composición de figuras de crimen, hallar en la historia una época o un pueblo que pudieran ofrecernos tales y tantas aberraciones. Hacemos historia, sin interpretaciones de carácter psicológico o social, que reclamarían particular estudio. La revolución anárquica ha sido «excepcional en la historia».

Añadimos que la hecatombe producida en personas y cosas por la revolución comunista fue «premeditada». Poco antes de la revuelta habían llegado de Rusia 79 agitadores especializados. La Comisión Nacional de Unificación Marxista, por los mismos días, ordenaba la constitución de las milicias revolucionarias en todos los pueblos. La destrucción de las iglesias, o a lo menos de su ajuar, fue sistemática y por series. En el breve espacio de un mes se habían inutilizado todos los templos para el culto. Ya en 1931 la Liga Atea tenía en su programa un artículo que decía: «Plebiscito sobre el destino que hay que dar a las iglesias y casas parroquiales»; y uno de los comités provinciales daba

esta norma: «El local o locales destinados hasta ahora al culto se destinarán a almacenes colectivos, mercados públicos, bibliotecas populares, casas de baño o higiene pública, etc., según convenga a las necesidades de cada pueblo». Para la eliminación de personas destacadas que se consideraban enemigas de la revolución se habían formado previamente las «listas negras». En algunas, y en primer lugar, figuraba el obispo. De los sacerdotes decía un jefe comunista, ante la actitud del pueblo que quería salvar a su párroco: «Tenemos orden de quitar toda su semilla».

Prueba elocuentísima de que la destrucción de los templos y la matanza de los sacerdotes, en forma totalitaria, fue cosa premeditada, es su número espantoso. Aunque son prematuras las cifras, contamos unas 20.000 iglesias y capillas destruidas o totalmente saqueadas. Los sacerdotes asesinados, contando un promedio del 40 por 100 en las diócesis devastadas—en algunas llegan al 80 por 100—, sumarán, sólo del clero secular, unos 6.000. Se les cazó con perros, se les persiguió a través de los montes; fueron buscados con afán en todo escondrijo. Se les mató sin juicio las más de las veces, sobre la marcha, sin más razón que su oficio social.

Fue «cruelísima» la revolución. Las formas de asesinato revistieron caracteres de barbarie horrenda. En su número: se calculan en número superior a 300.000 los seglares que han sucumbido asesinados, sólo por sus ideas políticas y especialmente religiosas; en Madrid, y en los tres meses primeros, fueron asesinados más de 22.000. Apenas hay pueblo en que no se haya eliminado a los más destacados derechistas. Por la falta de forma: sin acusación, sin pruebas, las más de las veces sin juicio. Por los vejámenes: a muchos se les han amputado los miembros o se les ha mutilado espantosamente antes de matarlos; se les han vaciado los ojos, cortado la lengua, abierto en canal, quemado o enterrado vivos, matado a hachazos. La crueldad máxima se ha ejercido con los ministros de Dios. Por respeto y caridad no queremos puntualizar más.

La revolución fue «inhumana». No se ha respetado el pudor de la mujer, ni aun la consagrada a Dios por sus votos. Se han profanado las tumbas y cementerios. En el famoso monasterio románico de Ripoll se han destruido los sepulcros, entre los que había el de Vifredo el Velloso, conquistador de Cataluña, y el del obispo Morgades, restaurador del célebre cenobio. En Vich se ha profanado la tumba del gran Balmes, y leemos que se ha jugado al fútbol con el cráneo del gran obispo Torras y Bagés. En Madrid y en el cementerio viejo de Huesca se han abierto centenares de tumbas para despojar a los cadáveres del

oro de sus dientes o de sus sortijas. Algunas formas de martirio suponen la subversión o supresión del sentido de humanidad.

La revolución fue «bárbara», en cuanto destruyó la obra de civilización de siglos. Destruyó millares de obras de arte, muchas de ellas de fama universal. Saqueó o incendió los archivos, imposibilitando la rebusca histórica y la prueba instrumental de los hechos de orden jurídico y social. Quedan centenares de telas pictóricas acuchilladas, de esculturas mutiladas, de maravillas arquitectónicas para siempre deshechas. Podemos decir que el caudal de arte, sobre todo religioso, acumulado en siglos, ha sido estúpidamente destrozado en unas semanas en las regiones dominadas por los comunistas. Hasta al arco de Bará, en Tarragona, obra romana que había visto veinte siglos, llevó la dinamita su acción destructora. Las famosas colecciones de arte de la catedral de Toledo, del palacio de Liria, del Museo del Prado, han sido torpemente expoliadas. Numerosas bibliotecas han desaparecido. Ninguna guerra, ninguna invasión bárbara, ninguna conmoción social, en ningún siglo, ha causado en España ruina semejante a la actual, juntándose para ello factores de que no se dispuso en ningún tiempo: una organización sabia, puesta al servicio de un terrible propósito de aniquilamiento, concentrado contra las cosas de Dios, y los modernos medios de locomoción y destrucción, al alcance de toda mano criminal.

Conculcó la revolución los más elementales principios del «derecho de gentes». Recuérdense las cárceles de Bilbao, donde fueron asesinados por las multitudes, en forma inhumana, centenares de presos; las represalias cometidas en los rehenes custodiados en buques y prisiones, sin más razón que un contratiempo de guerra; los asesinatos en masa, atados los infelices prisioneros e irrigados con el chorro de balas de las ametralladoras; el bombardeo de ciudades indefensas, sin objetivo militar.

La revolución fue esencialmente «antiespañola». La obra destructora se realizó a los gritos de «¡Viva Rusia!», a la sombra de la bandera internacional comunista. Las inscripciones murales, la apología de personajes forasteros, los mandos militares en manos de jefes rusos, el expolio de la nación en favor de extrajeros, el himno internacional comunista, son prueba sobrada del odio al espíritu nacional y al sentido de patria.

Pero, sobre todo, la revolución fue «anticristiana». No creemos que en la historia del cristianismo y en el espacio de unas semanas se haya dado explosión semejante, en todas las formas de pensamiento, de voluntad y de pasión, del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. Tal ha sido el sacrilego estrago

que ha sufrido la Iglesia en España, que el delegado de los rojos españoles enviado al Congreso de los «sin-Dios», en Moscú, pudo decir: «España ha superado en mucho la obra de los soviets, por cuanto la Iglesia en España ha sido completamente aniquilada».

Contamos los mártires por millares; su testimonio es una esperanza para nuestra pobre patria; pero casi no hallaríamos en el Martirologio romano una forma de martirio no usada por el comunismo, sin exceptuar la crucifixión; y, en cambio, hay formas nuevas de tormento que han consentido las sustancias y máquinas modernas.

El odio a Jesucristo y a la Virgen ha llegado al paroxismo, y en los centenares de crucifijos acuchillados, en las imágenes de la Virgen bestialmente profanadas, en los pasquines de Bilbao en que se blasfemaba sacrilegamente de la Madre de Dios, en la infame literatura de las trincheras rojas, en que se ridiculizan los divinos misterios; en la reiterada profanación de las sagradas formas, podemos adivinar el odio del infierno encarnado en nuestros infelices comunistas. «Tenía jurado vengarme de ti—le decía uno de ellos al Señor encerrado en el sagrario—; y encañonando la pistola disparó contra él diciendo: «Ríndete a los rojos; ríndete al marxismo».

Ha sido espantosa la profanación de las sagradas reliquias: han sido destrozados o quemados los cuerpos de San Narciso, San Pascual Bailón, la Beata Beatriz de Silva, San Bernardo Calvo y otros. Las formas de profanación son inverosímiles, y casi no se conciben sin sugestión diabólica. Las campanas han sido destrozadas y fundidas. El culto, absolutamente suprimido en todo el territorio comunista, si se exceptúa una pequeña porción del Norte. Gran número de templos, entre ellos verdaderas joyas de arte, han sido totalmente arrasados; en esta obra única se ha obligado a trabajar a pobres sacerdotes. Famosas imágenes de veneración secular han desaparecido para siempre, destruidas o quemadas. En muchas localidades la autoridad ha obligado a los ciudadanos a entregar todos los objetos religiosos de su pertenencia para destruirlos públicamente: pónedse lo que esto representa en el orden del derecho natural, de los vínculos de familia y de la violencia hecha a la conciencia cristiana.

No seguimos, venerables hermanos, en la crítica de la actuación comunista en nuestra patria y dejamos a la historia la fiel narración de los hechos en ella acontecidos. Si se nos acusara de haber señalado en forma tan cruda estos estigmas de nuestra revolución, nos justificaríamos con el ejemplo de San Pablo,

que no duda en vindicar con palabras tremendas la memoria de los próteras de Israel y que tiene durísimos calificativos para los enemigos de Dios; o con el de nuestro Santísimo Padre, que, en su encíclica sobre el comunismo ateo, habla de «una destrucción tan espantosa llevada a cabo en España con un odio, una barbarie y una ferocidad, que no se hubiese creído posible en nuestro siglo».

Reiteramos nuestra palabra de perdón para todos y nuestro propósito de hacerles el bien máximo que podamos. Y cerramos este párrafo con estas palabras del «Informe oficial» sobre las ocurrencias de la revolución en sus tres primeros meses: «No se culpe al pueblo español de otra cosa más que de haber servido de instrumento para la perpetración de estos delitos...» Este odio a la religión y a las tradiciones patrias, de las que eran exponente y demostración tantas cosas para siempre perdidas, «llegó de Rusia, exportado por orientales de espíritu perverso». En descargo de tantas víctimas, alicuinadas por «doctrinas de demonios», digamos que al morir, sancionados por la ley, nuestros comunistas se han reconciliado en su inmensa mayoría con el Dios de sus padres. En Mallorca han muerto impenitentes sólo un 2 por 100; en las regiones del Sur no más de un 20 por 100; y en las del Norte no llegan tal vez al 10 por 100. Es una prueba del engaño de que ha sido víctima nuestro pueblo.

7. *El movimiento nacional: sus caracteres*

Demos ahora un esbozo del carácter del movimiento llamado «nacional». Creemos justa esta denominación. Primero, por su espíritu; porque la nación española estaba disociada en su inmensa mayoría de una situación estatal que no supo encarnar sus profundas necesidades y aspiraciones; y el movimiento fue aceptado como una esperanza en toda la nación; en las regiones no liberadas sólo espera romper la coraza de las fuerzas comunistas que le oprimen. Es también nacional por su objetivo, por cuanto tiende a salvar y sostener para lo futuro las esencias de un pueblo organizado en un Estado que sepa continuar dignamente su historia. Expresamos una realidad y un anhelo general de los ciudadanos españoles; no indicamos los medios para realizarlo.

El movimiento ha fortalecido el sentido de patria, contra el exotismo de las fuerzas que le son contrarias. La patria implica una paternidad; es el ambiente moral, como de una familia dilatada, en que logra el ciudadano su desarrollo total; y el movimiento nacional ha determinado una corriente de amor

que se ha concentrado alrededor del nombre y de la sustancia histórica de España, con aversión de los elementos forasteros que nos acarrestaron la ruina. Y como el amor patrio, cuando se ha sobrenaturalizado por el amor de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, *toca las cumbres de la caridad cristiana, hemos visto una explosión de verdadera caridad que ha tenido su expresión máxima en la sangre de millares de españoles que la han dado al grito de « ¡Viva España! », « ¡Viva Cristo Rey! »*

Dentro del movimiento nacional se ha producido el fenómeno, maravilloso, del martirio—de verdadero martirio, como ha dicho el Papa—de millares de españoles, sacerdotes, religiosos y seglares; y este testimonio de sangre deberá condicionar en lo futuro, so pena de inmensa responsabilidad política, la actuación de quienes, depuestas las armas, hayan de construir el nuevo Estado en el sosiego de la paz.

El movimiento ha garantizado el orden en el territorio por él dominado. Contraponemos la situación de las regiones en que ha prevalecido el movimiento nacional a las dominadas aún por los comunistas. De estas puede decirse la palabra del Sabio: *Ubi non est gubernator, dissipabitur populus*, sin sacerdotes, sin templos, sin culto, sin justicia, sin autoridad, son presa de terrible anarquía, del hambre y de la miseria. En cambio, en medio del esfuerzo y del dolor terrible de la guerra, las otras regiones viven en la tranquilidad del orden interno, bajo la tutela de una verdadera autoridad, que es el principio de la justicia, de la paz y del progreso que prometen la fecundidad de la vida social. Mientras en la España marxista se vive sin Dios, en las regiones indemnes o reconquistadas se celebra profusamente el culto divino y pululan y florecen nuevas manifestaciones de la vida cristiana.

Esta situación permite esperar un régimen de justicia y paz para el futuro. No queremos aventurar ningún presagio. Nuestros males son gravísimos. La relajación de los vínculos sociales; las costumbres de una política corrompida; el desconocimiento de los deberes ciudadanos; la escasa formación de una conciencia íntegramente católica; la división espiritual en orden a la solución de nuestros grandes problemas nacionales; la eliminación por asesinato cruel de millares de hombres selectos llamados por su estado y formación a la obra de la reconstrucción nacional; los odios y la escasez que son secuelas de toda guerra civil; la ideología extranjera sobre el Estado, que tiende a descajarle de la idea y de las influencias cristianas, ~~son~~ dificultad enorme para hacer una España nueva injertada en el tronco de nuestra vieja historia y vivificada por su savia.

Pero tenemos la esperanza de que, imponiéndose con toda su fuerza el enorme sacrificio realizado, encontraremos otra vez nuestro verdadero espíritu nacional. Entramos en el paulatinamente por una legislación en que predomina el sentido cristiano en la cultura, en la moral, en la justicia social y en el honor y culto que se debe a Dios. Quiera Dios ser en España el primer bien servido, condición esencial para que la nación sea verdaderamente bien servida.

8. Se responde a unos reparos

No llenaríamos el fin de esta carta, venerables hermanos, si no respondiéramos a algunos reparos que se nos han hecho desde el extranjero.

Se ha acusado a la Iglesia de haberse defendido contra un movimiento popular haciéndose fuerte en sus templos y siguiéndose de aquí la matanza de sacerdotes y la ruina de las iglesias.—Decimos que no. La irrupción contra los templos fue súbita, casi simultánea en todas las regiones, y coincidió con la matanza de sacerdotes. Los templos ardieron porque eran casas de Dios, y los sacerdotes fueron sacrificados porque eran ministros de Dios. La prueba es copiosísima. La Iglesia no ha sido agresora. Fue la primera bienhechora del pueblo, inculcando la doctrina y fomentando las obras de justicia social. Ha sucumbido—donde ha dominado el comunismo anárquico—víctima inocente, pacífica, indefensa.

Nos requieren del extranjero para que digamos si es cierto que la Iglesia de España era propietaria del tercio del territorio nacional y que el pueblo se ha levantado para librarse de su opresión.—Es acusación ridícula. La Iglesia no poseía más que pocas e insignificantes parcelas, casas sacerdotales y de educación, y hasta de esto se había últimamente incautado el Estado. Todo lo que posee la Iglesia en España no llenaría la cuarta parte de sus necesidades y responde a sacratísimas obligaciones.

Se le imputa a la Iglesia la nota de temeridad y partidismo al mezclarse en la contienda que tiene dividida a la nación.—La Iglesia se ha puesto siempre del lado de la justicia y de la paz, y ha colaborado con los poderes del Estado, en cualquier situación, al bien común. No se ha atado a nadie, fuesen partidos, personas o tendencias. Situada por encima de todos y de todo, ha cumplido sus deberes de adoctrinar y exhortar a la caridad, sintiendo pena profunda por haber sido perseguida y repudiada por gran número de hijos extraviados. Apelamos a los copiosos escritos y hechos que abonan estas afirmaciones.

Se dice que esta guerra es de clases y que la Iglesia se ha puesto del lado de los ricos.—Quienes conocen sus causas y naturaleza saben que no. Que aun reconociendo algún descuido en el cumplimiento de los deberes de justicia y caridad, que la Iglesia ha sido la primera en urgir, las clases trabajadoras estaban fuertemente protegidas por la ley, y la nación había entrado por el franco camino de una mejor distribución de la riqueza. La lucha de clases es más virulenta en otros países que en España. Precisamente en ella se han librado de la guerra horrible gran parte de las regiones más pobres, y se ha ensañado más donde ha sido mayor el coeficiente de la riqueza y del bienestar del pueblo. Ni pueden echarse en olvido nuestra avanzada legislación social y nuestras prósperas instituciones de beneficencia y asistencia pública y privada, de abolengo español y cristianísimo. El pueblo fue engañado con promesas irrealizables, incompatibles no sólo con la vida económica del país, sino con cualquier clase de vida económica organizada. Aquí está la bienandanza de las regiones indemnes, y la miseria que se adueñó ya de las que han caído bajo el dominio comunista.

La guerra de España, dicen, no es más que un episodio de la lucha universal entre la democracia y el estatismo; el triunfo del movimiento nacional llevará a la nación a la esclavitud del Estado. La Iglesia de España—leemos en una revista extranjera—, ante el dilema de la persecución por el Gobierno de Madrid o la servidumbre a quienes representan tendencias políticas que nada tienen de cristiano, ha optado por la servidumbre.—No es éste el dilema que se ha planteado a la Iglesia en nuestro país, sino éste: La Iglesia, antes de perecer totalmente en manos del comunismo, como ha ocurrido en las regiones por él dominadas, se siente amparada por un poder que hasta ahora ha garantizado los principios fundamentales de toda sociedad, sin miramiento ninguno a sus tendencias políticas.

Cuanto a lo futuro, no podemos predecir lo que ocurrirá al final de la lucha. Sí que afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un Estado autócrata sobre una nación humillada, sino para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los tiempos viejos. Confiamos en la prudencia de los hombres de gobierno, que no querrán aceptar moldes extranjeros para la configuración del Estado español futuro, sino que tendrán en cuenta las exigencias de la vida íntima nacional y la trayectoria marcada por los siglos pasados. Toda sociedad bien ordenada se basa sobre principios profundos y de ellos vive, no de aportaciones adjetivas y extrañas, discordes con el espíritu nacional. La vida

es más fuerte que los programas, y un gobernante prudente no impondría un programa que violenta las fuerzas íntimas de la nación. Seríamos los primeros en lamentar que la autocracia irresponsable de un parlamento fuese sustituida por la más terrible de una dictadura desarraigada de la nación. Abrigamos la esperanza legítima de que no será así. Precisamente lo que ha salvado a España en el gravísimo momento actual ha sido la persistencia de los principios seculares que han informado nuestra vida y el hecho de que un gran sector de la nación se alzara para defenderlos. Sería un error quebrar la trayectoria espiritual del país, y no es de creer que se caiga en él.

Se imputan a los dirigentes del movimiento nacional crímenes semejantes a los cometidos por los del Frente Popular. «El ejército blanco, leemos en acreditada revista católica extranjera, recurre a medios injustificables contra los que debemos protestar... El conjunto de informaciones que tenemos indica que el terror blanco reina en la España nacionalista con todo el horror que presentan casi todos los terrores revolucionarios... Los resultados obtenidos parecen despreciables al lado del desarrollo de crueldad metódicamente organizada de que hacen prueba las tropas».—El respetable articulista está malísimamente informado. Tiene toda guerra sus excesos; los habrá tenido, sin duda, el movimiento nacional; nadie se defiende con total serenidad de las locas arremetidas de un enemigo sin entrañas. Reprobando en nombre de la justicia y de la caridad cristiana todo exceso que se hubiese cometido, por error o por gente subalterna y que metódicamente ha abultado la información extranjera, decimos que el juicio que rectificamos no responde a la verdad, y afirmamos que va una distancia enorme, infranqueable, entre los principios de justicia de su administración y de la forma de aplicarla entre una y otra parte. Más bien diríamos que la justicia del Frente Popular ha sido una historia terrible de atropellos a la justicia contra Dios, la sociedad y los hombres. No puede haber justicia cuando se elimina a Dios, principio de toda justicia. Matar por matar, destruir por destruir; expoliar al adversario no beligerante como principio de actuación cívica y militar: he aquí lo que se puede afirmar de los unos con razón y no se puede imputar a los otros sin injusticia.

Dos palabras sobre el problema del nacionalismo vasco, tan desconocido y falseado y del que se ha hecho arma contra el movimiento nacional. —Toda nuestra admiración por las virtudes cívicas y religiosas de nuestros hermanos vascos. Toda nuestra caridad por la gran desgracia que les aflige, que consi-

deramos nuestra, porque es la de la Patria. Toda nuestra pena por la ofuscación que han sufrido sus dirigentes en un momento grave de su historia. Pero toda nuestra reprobación por haber desoído la voz de la Iglesia y tener realidad en ellos las palabras del Papa en su encíclica sobre el comunismo: «Los agentes de destrucción, que no son tan numerosos, aprovechándose de estas discordias (de los católicos), las hacen más estridentes, y acaban por lanzar a la lucha a los católicos los unos contra los otros». —«Los que trabajan por aumentar las disensiones entre los católicos toman sobre sí una terrible responsabilidad, ante Dios y ante la Iglesia». —«El comunismo es intrínsecamente perverso, y no se puede admitir que colaboren con él en ningún terreno los que quieren salvar la civilización cristiana». —«Cuanto las regiones donde el comunismo consigue penetrar más se distinguen por la antigüedad y grandeza de su civilización cristiana, tanto más devastador se manifestará allí el odio de los sin Dios».

En una revista extranjera de gran circulación se afirma que el pueblo se ha separado en España del sacerdote porque éste se recluta en la clase señorial, y que no quiere bautizar a sus hijos por los crecidos derechos de administración del sacramento. —A lo primero respondemos que las vocaciones en los distintos seminarios de España están reclutadas en la siguiente forma: número total de seminaristas en 1935: 7.401; nobles, 6; ricos, con un capital superior a 10.000 pesetas, 115; pobres o casi pobres, 7.280. A lo segundo, que antes del cambio de régimen no llegaban los hijos de padres católicos no bautizados al 1 por 10.000; el arancel es modicísimo, y nulo para los pobres.

Conclusión

Cerramos, venerables hermanos, esta ya larga carta rogándoos nos ayudéis a lamentar la gran catástrofe nacional de España, en que se han perdido, con la justicia y la paz, fundamento del bien común y de aquella vida virtuosa de la ciudad de que nos habla el Ángelico, tantos valores de civilización y de vida cristiana. El olvido de la verdad y de la virtud en el orden político, económico y social nos ha acarreado esta desgracia colectiva. Hemos sido mal gobernados, porque, como dice Santo Tomás, Dios hace reinar al hombre hipócrita por causa de los pecados del pueblo.

A vuestra piedad añadid la caridad de vuestras oraciones y las de vuestros fieles para que aprendamos la lección del castigo con que Dios nos ha probado, para que se reconstruya

pronto nuestra Patria y pueda llenar sus destinos futuros, de que son presagio los que ha cumplido en siglos anteriores; para que se contenga, con el esfuerzo y las oraciones de todos, esta inundación del comunismo que tiende a anular al Espíritu de Dios y al espíritu del hombre, únicos polos que han sostenido las civilizaciones que fueron.

Y completad vuestra obra con la caridad de la verdad sobre las cosas de España. *Non est addenda afflictio afflictis*; a la pena por lo que sufrimos se ha añadido la de no haberse comprendido nuestros sufrimientos. Más, la de aumentarlos con la mentira, con la insidia, con la interpretación torcida de los hechos. No se nos ha hecho siquiera el honor de considerarnos víctimas. La razón y la justicia se han pesado en la misma balanza que la sinrazón y la injusticia, tal vez la mayor que han visto los siglos. Se ha dado el mismo crédito al periódico asalariado, al folleto procaz o al escrito del español prevaricador, que ha arrastrado por el mundo con vilipendio el nombre de su madre Patria, que a la voz de los prelados, al concienzudo estudio del moralista o a la relación auténtica del cúmulo de hechos que son afrenta de la humana historia. Ayudadnos a difundir la verdad. Sus derechos son imprescriptibles, sobre todo cuando se trata del honor de un pueblo, de los prestigios de la Iglesia, de la salvación del mundo. Ayudadnos con la divulgación del contenido de estas letrras, vigilando la prensa y la propaganda católica, rectificando los errores de la indiferente o adversa. El hombre enemigo ha sembrado copiosamente la cizaña; ayudadnos a sembrar profusamente la buena semilla.

Consentidnos una declaración última. Dios sabe que amamos en las entrañas de Cristo y perdonamos de todo corazón a cuantos, sin saber lo que hacían, han inferido daño gravísimo a la Iglesia y a la Patria. Son hijos nuestros. Invocamos ante Dios y en favor de ellos los méritos de nuestros mártires, de los diez obispos y de los miles de sacerdotes y católicos que murieron perdonándoles, así como el dolor, como de mar profundo, que sufre nuestra España. Rogad para que en nuestro país se extingan los odios, se acerquen las almas y volvamos a ser todos unos en el vínculo de la caridad. Acordaos de nuestros obispos asesinados, de tantos millares de sacerdotes, religiosos y seglares selectos que sucumbieron sólo porque fueron las milicias escogidas de Cristo, y pedid al Señor que dé fecundidad a su sangre generosa. De ninguno de ellos se sabe que claudicara en la hora del martirio; por millares dieron altísimos ejemplos de heroísmo. Es gloria inmarcesible de nuestra España. Ayudad-

nos a orar, y sobre nuestra tierra, regada hoy con sangre de hermanos, brillará otra vez el iris de paz cristiana y se reconstruirán a la par nuestra Iglesia, tan gloriosa, y nuestra Patria, tan fecunda.

Y que la paz del Señor sea con todos nosotros, ya que nos ha llamado a todos a la gran obra de la paz universal, que es el establecimiento del reino de Dios en el mundo por la edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, de la que nos ha constituido obispos y pastores.

Os escribimos desde España, haciendo memoria de los hermanos difuntos y ausentes de la patria, en la fiesta de la Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, 1 de julio de 1937.

6. -19 de agosto de 1931. "A las Cortes constituyentes."

BDE de Segovia, año 76, 31 de agosto de 1931, núm. 16, págs. 364-371.

La Junta de Acción Católica femenina de la Diócesis, respondiendo a la iniciativa de la Junta central, ha organizado tanto en la capital como en los parroquias de la Diócesis la recepción de firmas de las señoras que han sentido el deber de protestar contra los acuerdos antirreligiosos, expulsión de Roldanos, Prelados y artículos del anteproyecto de Constitución, que hieran profundamente sus sentimientos religiosos. El número de firmas hasta el día 20 inclusive del corriente ascendía a 41.742, correspondientes a la capital y 147 pueblos.

En dos gruesos volúmenes—en el primero las de la Capital, cuatro cabzas de partido y pueblos por orden alfabético hasta la E inclusive; en el segundo desde la F hasta el final—con la inscripción en la lamiere, en letra doradas—«Petición colectiva del Obispado de Segovia a las Cortes Constituyentes—1931»—fueron entregados en Madrid el día 23 de los corrientes. Aun siguen llegando firmas.

Dichas firmas, unidas con las de toda la España católica, habrán sido entregadas a las Cortes Constituyentes, para que conozcan, respeten y atiendan los sacrosantos derechos de la Iglesia romana y la realidad católica de la nación. La Junta diocesana publica esta nota informativa, como la que figura en el frente del tomo primero, para conocimiento de los interesados.

A LAS CORTES CONSTITUYENTES

Los fieles del Obispado de Segovia, católicos en la casi totalidad del censo, representados por los millares que suscriben, ejercitan, en función de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes, el de petición colectiva ante las Cortes Constituyentes, reunidas en esta hora delicada y trascendental, para forjar la nueva Constitución de la Nación. *Católicos*, en la más estricta acepción del vocablo, en toda la integridad de la doctrina, enseñada por la Iglesia Romana, maestra infalible de la fe y de la moral; *Católicos* en la vida privada y en la vida pública, ya que lo contrario sería mezclar en la misma persona lo bueno y lo malo, hacer de la misma una contradicción, una lucha reprobable, contraproducente y absurda; *Católicos* en toda modalidad y circunstancias de su vivir y actuar, gloriándose de este título, por ser *divino* y hacer al hombre participante de lo *divino*, sobre todos los que la humanidad tiene como enaltecedores y prestigiosos; profundamente *Católicos*, y por lo mismo ciudadanos, sumisos a toda autoridad legítima y prontos a cumplir los deberes sociales, intervinimos, por doble motivo de fe y de patriotismo, y acudimos a las Cortes, para exponer, notar e instar lo siguiente.

Primero.—Pedimos al Gobierno provisional en Junio último la revisión de los decretos antirreligiosos y laicos dictados hasta el presente por el mismo, como también la revocación de las expulsiones del Emmo. Cardenal Prímado de España, apostólico y dignísimo Jefe de la Iglesia española y de los venerables y dignísimos Obispos de Málaga y Vitoria. Contra tales actos protestamos energicamente, en satisfacción de un gravísimo deber de conciencia

y humanidad. Desatendidas hasta el presente nuestras súplicas, nos vemos obligados a renovar nuestra protesta, y reiteramos nuestros ruegos de derogación de esos acuerdos de excepción, injustificados, violentos, atentatorios al fuero eclesiástico, al Concordato vigente y aun a los derechos individuales más sagrados y elementales. No es posible silenciar esta protesta, ni dejar de reiterarla, mientras no se de satisfacción al clamor unánime de los católicos que encarna la justicia y defensa de los derechos de la Iglesia y de su jerarquía y de los individuales, proclamados a todo viento, como intangibles, por el régimen democrático. Cierren las Cortes esa honda herida, abierta en nuestros corazones de católicos, que sienten, en exquisita solidaridad espiritual, los católicos de todo el orbe.

Segundo.—La eficiencia, duración y consecuencias de la Constitución a votar, pende de su ajuste a la ley natural, a la tradición milenaria, a la historia, necesidades y modalidades de la nación.

Si el texto elaborado por la Comisión parlamentaria, ha tenido fiel publicación en la prensa, vemos con honda pena, con indecible angustia, en los artículos 3.º-24-25-42-46 y otros concordes con la tendencia de los anteriores, su total e inconciliable oposición con la doctrina católica, con los derechos concedidos a la Iglesia por su Fundador Jesucristo, con su libertad e independencia, con su jurisdicción propia y soberana y con las más fundamentales enseñanzas del derecho natural, político, económico y social.

El anteproyecto es ateo, laico a toda vela, colectivista en sus audacias, perseguidor con radicalismos, que nunca pudimos esperar, de la Iglesia católica en su esencia, e instituciones, en su libertad y en sus Institutos religiosos; en su propiedad legítima y sagrada y en sus sacerdotes, a los que no reconoce sus derechos privativos.

Si en sus artículos se trata de la religión es para anularla, con sectarismo no disimulado, para subordinarla al Estado, que se convertiría en tirano legal, si prosperaran el espíritu y la letra del anteproyecto.

No cabe en esta instancia la retutación, punto por punto, artículo por artículo, palabra por palabra, que desearíamos.

La sociedad civil, natural y necesaria al hombre, no derivada de un contrato, ni de la convención libre, tiene, por primer deber, por necesidad irreprimible, el dar culto social a Dios. Obra de Dios, su creador, conservador, providencia y soberano eterno y omnipotente, como tal estado, como tal nación, está obligada a rendirle culto, si ha de subsistir, desenvolverse y conseguir su fin. Del cumplimiento de este deber derivan preciosos bienes, el respeto a la Autoridad, la fidelidad a la Constitución, la obediencia a las leyes civiles, la práctica de las virtudes sociales, la justicia y la caridad, la abnegación y la paciencia, la generosidad y los sacrificios por el bien general que debe prevalecer sobre el bien particular. No puede imponer estas virtudes el código civil, ni fuera de la religión hay motivos suficientes a determinar al hombre en la lucha con sus apelenias egoístas.

Esta doctrina básica, al alcance de cualquier cultura, pre-

didá, como flama de vida, en cuantos saben de catecismo católico, se hace preciso recordarlo en estos tiempos de confusiónismos, de extravío, de empeños no, por ciegos e impotentes, menos de lamentar, de excluir la idea de Dios y de la religión, de la portada, del espíritu y de la letra de la Constitución.

No hemos de desmatizar el elevado concepto, que sentimos, de la cultura, de las Cortes, de su penetración y amor a la justicia y al bien de la Nación, con la mera suposición de que desconozcan u olviden los luminosos testimonios de filósofos, hombres de Estado, economistas y publicistas insignes, unánimes en proclamar la necesidad de la religión para procurar y mantener el orden social. Son innumerables, de todo tiempo y siglo:

«La religión es el fundamento del Estado; la ciudadela y muralla de la Constitución del país» (Platón).

Si la Religión es despreciada, el Estado recibe una herida profunda» (Cicerón).

«Sabemos que la Religión es el fundamento de la sociedad civil; y sin ella nada prospera entre los hombres» (Burke).

«La Religión y la moral son los sostenes más indispensables de la prosperidad pública» (Washington).

La historia, testigo perenne del pasado, maestra de la vida, experiencia orientadora de la humanidad, exponente de heroísmos legendarios y aberraciones inconcebibles, de virtudes aromosas y pasiones sin brida, según las autoridades y los súbditos hayan tenido por norte la religión o intentado destruirla, confirma a cuantos la miren serenamente, sin prejuicios, ni imposiciones de secta, en cualquiera de sus épocas, los testimonios de la intelectualidad, antes citada.²¹

Los argumentos sugeridos valen para todos los pueblos: Tienen valor acentuado, sin rival, para nuestra España, compenetrada con la religión a maravilla, y que de la savia de la Religión recibió su vida, crecimientos, cualidades y virtudes raciales, que la conquistaron provechos, civilización, admiración y alturas de gloria, que aun hoy la envidian los pueblos más grandes de la tierra.

No debe, no puede consentirse que en el cunafronte de la Constitución se diga «No existe religión del Estado».

La Iglesia es sociedad espiritual, superior su fin al del Estado, jurídicamente perfecta e independiente, con la potestad, recibida de su divino fundador, precisa a la consecución de su fin. No pueden aceptarse los artículos del anteproyecto, que desconocen su naturaleza y su potestad,

subordinándola al Estado, como una Asociación civil cualquiera y limitan su actividad social y la exprolian de sus medios propios y la niegan todo auxilio económico oficial.

Las Ordenes religiosas, ornamento preciado de la Iglesia, tipos de pureza, de abnegación, de sacrificio y de caridad con los humildes, flores amorosas abiertas espon-táneamente al calor del Evangelio, imitaciones admirables de Jesucristo, obreros infatigables de la cultura, de la civilización y del amor al pueblo y a la patria, quedan disueltas en el anteproyecto, en nombre de la democracia, y decretada a continuación la nacionalización de sus bienes. Ello sería no solo la mayor injuria al derecho canónico y de gentes, sino seño oprobioso para el parlamento que lo admitiere, tanto más cuanto que en otro artículo — el 37 — concede el que «los españoles puedan asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana».

A toda hora se repite, como *leit-motiv* de estas medidas la necesidad de poner a España al tono de Europa. Permítasenos observar que las Constituciones extranjeras y señaladamente las de la post-guerra, las de Polonia, Austria, Alemania, Checo Eslovaquia, de los serbios, croatas y eslovenos, y otras, aun con las condiciones de sus países inmensamente distantes de las de esta patria tan amada, son más justas, respetuosas y cuerdas con la Religión y cuanto a ella atañe. Basta con hojearlas ligeramente.

El anteproyecto de la Comisión, saltando sobre todo derecho, justicia, consideración y conveniencia de la nación, solo mira, a juzgar por los artículos, al exterminio de la Religión católica y de sus ministros, negándoles todo auxilio y protección, encerrándolos en sus templos, y aun dentro de ellos el respeto es sin valor, ni garantías, ya que se arroga la inspección y los deja a la arbitrariedad de cualquier autoridad, que puede intervenir en nombre del orden público!

Proceder tanto más extraño y sorprendente, cuanto que dicho anteproyecto ha sufrido influencias considerables de la Constitución de Weimar, hasta el punto de resultar exótico, por la fidelidad, con que la sigue en tantas formulaciones, fáciles de señalar. Al determinar, sin embargo, lo que se ha dado en llamar «régimen jurídico de las Iglesias», se separa bruscamente de dicha Constitución. La de Weimar, a pesar de estar hecha con miras a un país oficialmente y en su parte mayoritaria protestante, garantiza la libertad, autonomía, enseñanza, propiedad y derechos económicos de las Iglesias, con otras concesiones que sin llegar a lo normal,

dicen el interés y cuidado del Estado en el punto vital de la religión. La que se pretende dar a España, nación profundamente católica, que en la negación de los derechos fundamentales, en los más crudos sectarismos, hasta resultar persecutoria e inaceptable. Esperamos, confiamos y pedimos al gobierno y a las cortes no admitan esos artículos, los sustituyan por otros, en consonancia con los derechos sacralísimos de la Iglesia católica, las necesidades de la Nación y las creencias y sentimientos de la inmensa mayoría de los españoles. Que la legislación sea la que corresponde a un país católico en su pasado y en su presente; de otro modo éste no podría aceptarla y habría de repudiarla, con toda energía, sin descanso, por todos los medios legítimos, hasta conseguir la debida modificación.

El momento presente, con su red de huelgas, más que económicas, revolucionarias, las violencias, que estremecen algunas regiones; los intentos anarco-sindicalistas, los acuciantes problemas económicos, de honda preocupación, por ser frutos de sistemas, enemigos de la religión y de su influencia social, dicen con luz meridiana la necesidad de la religión y de su acción bienhechora para las corporaciones, para la sindicación, para toda institución, para el Estado; y señalan la ruta de decadencia y destrucción social, si fuere un hecho el triunfo integral de esas teorías.

Religión y moralidad requiere la vida, la democracia española; hay que abrir cauce a todos los problemas, aun a los económicos, en la moral—que todos tienen un fondo moral—y los fracasos de la economía del siglo pasado y presente, en su pretensión de independizarse de la moral, han sido inmensos y producido la deplorable situación actual.

Tercero,—Como es justo en un país, de la raigambre católica de España, queremos, suplicamos y demandamos, con todos los respetos, pero con toda firmeza, la unión normal de la Iglesia y el Estado, prestándose mutuo apoyo y defensa; el Estado, rindiendo a Dios el culto social en nombre del pueblo católico que representa y secundando con los medios a su alcance a la Iglesia en la consecución de su fin espiritual; y esta, protegiendo y defendiendo al Estado—como hasta al presente ha hecho—y caldeando a los ciudadanos en el amor a la patria, que tiene su principio, la raíz de su vitalidad, en el amor de Dios.

Soberanos el poder eclesiástico y civil, cada uno en su esfera propia, convivan en concordia, respeten ambos los límites, que les asignan sus fines respectivos, sin pretensiones de absorción o intrusión en la zona, que no es de su incumbencia. Busque el Estado un acuerdo justo y benéfico con la Iglesia, por medio de un Concordato, acomodado a las actuales circunstancias, al igual que lo vienen realizando con plausible empeño diplomático, los demás países de Europa.

Este es camino seguro para lograr el engrandecimiento de la patria, que ha de basarse en la concordia de los espíritus, en las tradiciones y virtudes raciales, que en otros siglos labraron nuestra hegemonía entre las naciones. Este gran pueblo, país de reacciones súbitas; despertara hacia el ideal, encontrará el orden y la paz, el bienestar y la grandeza, que Dios le tiene asignado en su amorosa Providencia.

Catolicismo y patriotismo son inseparables en nuestra patria; no tratemos, en esta hora, de tan singular responsabilidad, de disgregarlos, ni siquiera de espaciarlos, antes procuremos una más íntima unión, para bien de la Iglesia, para la salvación de la nación y para la consolidación del régimen democrático.

Segovia 19 de Agosto del año 1931

Siguen las firmas de la capital y de los pueblos siguientes, clasificadas por riguroso orden alfabético, aunque aquí se publican por el orden de recibo.

Espejo, Torre Val de San Pedro, Miguel Ibáñez, Pinarejos, Santa María de Nieva, Sanchoalino, Iruarros de Vulltoya, Bercial, Nava de la Asunción, Encinillas, Villoslada, La Lastrilla, Coca, Chade, Naválila, Dehesa de Cuéllar, Rebollo, Brieva, Narros de Cuéllar, Navafria, Arroyo de Cuéllar, Naves de Oro, Cabezueta, Ciruelos de Coca, Villagonzalo de Coca, Fuente de Santa Cruz, Moraleja de Coca, Cantalejo, La Cuesta, Lasras de Cuéllar, Santiuste de San Juan, Bautista, Laguna Rodrigo, Valseca, Bermejo de Pórreros, Valtielmonte, Navares de Enmedio, Migueláñez, Ochando, y Pascuales, Cubillo, Zamarramala, Nieva, Guijar, Gomezserracín, Yanguas de Eresma, Muñozpedro, Castroserracín, Navares de las Cuevas, Carbonero de Añasin, Ade, Elerrós, Puebla de Pedraza, Bernardos, Fuentidueña, Valtielendas, Laguna de Contreras, Calafuizas, Carbonero el Mayor, Sacramenia, Anaya, Muñozveros, Abaules, Cingeces de Iscar, Mata de Cuéllar, Mejeces de Iscar, Cuevas de Provanco, Castriño de Duero, Fresno de Cantesplano, Villeguillo, Bermejo de Coca, Torrecilla del Pinar, Fuenterrabollo, San Martín y Mudrián, Madroña, Armuña, AguilaFuente, Cuéllar, Pajares de Pedraza, Arbuñetas, Castroserna de Arriba, Castroserna de Abajo, Grajera, Veguilla, Fuentepiñal, La Higuera, Rota de Eresma, Revenga, Losana de Prión, Otombrada, Sotosalvos, Pelayos del Arroyo, Ciruelos de Fuentidueña, Valle de Tabladillo, Torreciglesia, Orejana, Fuente el Olmo de Iscar, Cobos de Fuentidueña, Moraleja, Cabañas de Pórreros, Pajares de Fresno, Fuentidueña, Villaverde de Iscar, Bahabon, Otonos, Santiagón de Valcorba, Pegueroños, Cantimpalos, Tabladillo, Piuilla, Ambroz, Argoneses, Viloria, Valtielva de Sepúlveda, Duruelo, Perotrubio, Villar de Sobrepacha, Santa María, Alcazarón, Santiuste de Pedraza, Traspinedo, Rianza, Pradajes, Santa Cruz de la Salceda, Mojados, Monterrubio, Fresno de Cuéllar, Aldeavieja, Campo de Cuéllar, Valtielado, Lastras del Pozo,

Pajarelos, Remondo, Torrecaballeros, Villacastin, Herreria de la Cuesta, Balisa, Palenzuela de Ercosma, Domingo Garcia, Valverde del Mejano, Iscar, Paradinas, Sepulveda, Sangencia, Adrados, Cascaixes, Castillejo de Mesleón, San Cristobal de Cuellar, y dos pueblos sin nombre, que no ha sido posible identificar.

7.º 1 y 2 de octubre de 1931. Informe de Ricardo Gómez Roja.

Esquema: Estat durant la segona República espanyola, I, pags 343-350.

EL DIPUTADO A CORTES POR BURGOS

El día 30, al tratarse los derechos electorales, se dividió la cuestión en dos: la de la edad y la de la mujer.

Los socialistas votaron por la edad de 21 años. La Comisión mantuvo un voto particular, que pasó a ser dictamen suyo, en favor de los 23 años. Las minorías católicas (vasconavarra y agraria) votaron con los radicales de Lerroux por los 23 años, y en contra de los socialistas.

En cuanto al voto de la mujer, los socialistas votaron a favor, y los radicales de Lerroux en contra, propuesta esta tesis contraria al voto femenino por el Sr. Guerra del Río de la manera más torpe, egoísta, baja y ofensiva para la mujer y para la Religión. Que Guerra del Río propuso torpísimamente la cuestión, es opinión casi unánime de la Cámara. En esta cuestión las minorías católicas votaron con los socialistas y en contra de los radicales de Lerroux.

Votadas así las dos enmiendas, y triunfantes los 23 años y el voto de la mujer, llegó hoy, día 1 de Octubre, la votación de la totalidad del artículo. El voto de totalidad ofrecía grave inconveniente a radicales y socialistas. El artículo 34 dice así, según la última redacción: «Los ciudadanos de uno u otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.» Se negaron los radicales de Lerroux a una redacción bímembre, en que un párrafo se refiriera a la edad, y otro al voto de la mujer, según pedían los socialistas. Hecha votación, prevaleció la negativa de los radicales de Lerroux. Y así se vino a la votación de totalidad, englosadas las dos cuestiones. En votación nominal ganó el artículo contra los radicales de Lerroux, que votaron en contra.

Y entonces estos radicales, en vez de expresar su sentir contra los socialistas o contra sí mismos por no haber aceptado la bímembreación del artículo caso en el que hubieran tenido los votos de las minorías católicas, se han encrespado contra los católicos, amenazando con extremar sus radicalismos en la cuestión religiosa la próxima semana. Incluso ha dicho el Sr. Guerra del Río que arremetieran contra la Religión por encima de Lerroux. ¿Esta posición es razonable? ¿O es que se aprovecha un pretexto para preparar la ofensiva a gusto de su marcado laicismo?

Pero, desarrollados los hechos como antes se ha dicho, ¿qué remedio quedaba a las minorías católicas? Sobre todo, propuesta la cuestión del voto femenino de manera tan reproble como lo hizo el Sr. Guerra del Río. Este es el curso, fin y consecuencia de la discusión del artículo 34 (enumeración primitiva), que conviene sea conocida fielmente para que la opinión de nadie no sea sorprendida. En los pasillos y en la Sala de Conferencias se veía bien a las claras la excitación producida por la concesión del voto a la mujer. Sin rebozo decían muchos que estaba perdida la República.

Otro punto sobre el que ayer —1 de Octubre— había comentarios vivos y continuos, era la dimisión del Emmo. Sr. Cardenal Segura. Los izquierdistas más encarnizados decían que eso era para obtener del Gobierno grandes ventajas a favor de la Iglesia; que era preciso no dejarse sorprender ni por el Gobierno; que esa dimisión no valía nada, pues no era concesión, era necesidad; y que el venir esa dimisión en vísperas de discutirse la cuestión religiosa, era síntoma de que se la trae como precio de concesiones a favor de la Iglesia.

También ha producido gran revuelo en las izquierdas lo del millón y medio de urnas presentadas por las señoras hace dos días. En la misma Sala de Sesiones, en increpaciones hechas en voz alta repetidas y numerosas veces, lo han señalado como índice de poder y fuerza de lo que llaman reacción.

Por estas razones la Cámara está muy excitada. Se da el caso de que en todas las filas más izquierdistas hay cierta irritación porque las intervenciones de Alcalá Zamora y la conducta de varios ministros, por no decir de todos, no dejan a los energúmenos votar del todo libremente, y se sienten esas izquierdas como represadas y anhelosas de saltar la barrera del gubernamentalismo del banco azul. Esperan su momento.

Tal es mi apreciación del momento en que nos acercamos a la discusión del tema religioso. Vista la hostilidad de socialistas y radicales socialistas a toda cuestión favorable a la Iglesia, *será perdida toda votación*, en que no tengamos a los radicales lerrouxistas de Alianza Republicana, y catalanes.

A) ¿Para qué se puede contar con éstos? Sólo para fórmulas de grandes transacciones. Tiene, pues, la Iglesia que decir hasta qué transacciones llega. ¿Se aviene a admitir la fórmula de que la Iglesia sea considerada como una Corporación de Derecho Público, mitigando esta expresión o por generalización de la frase o por vaguedad de concepto? Dé la fórmula concreta. ¿Se aviene a que las órdenes religiosas entren de lleno en una ley de asociaciones? Véalo. En torno a estas dos cuestiones-ejes, hay otras varias, v.g. en torno a la primera el presupuesto del clero y el culto.

B) Medio para atraernos a las minorías menos hostiles a las fórmulas de amplia transacción. La gestión de Alcalá Zamora. ¿La de otros? La de Fernando de los Ríos, de Ortega Gasset...? ¿? Otras cuestiones de procedimiento: ¿intervención de los sacerdotes o silencio? No los vamos a cietar, porque se les echan encima para arrullarlos.

8.- "Enmienda al art. 24 del proyecto de Constitución.- La definición de la Iglesia católica como Corporación de Derecho público.- Radicales y Acción Republicana votarán a favor de esta solución"

"El Sol", 8 de octubre de 1931.

A las Cortes constituyentes:

Los disputados que suscriben tienen el honor de someter a la consideración de las Cortes la siguiente enmienda al art. 24 del proyecto de Constitución:

"Art.21. Se establece la separación de la Iglesia y el Estado.

La Iglesia católica será considerada como Corporación de Derecho público. Igual calidad podrán tener la demás confesiones religiosas que lo soliciten, si por su constitución y el número de sus miembros ofrecen garantías de permanencia.

El Estado no podrá sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las Iglesias, Asociaciones e instituciones religiosas.

Un estatuto, votado como complemento de esta Constitución, establecerá el régimen aplicable a la Iglesia católica y a sus ministros. Asimismo, las Cortes constituyentes determinarán en una ley qué Ordenes religiosas serán disueltas y las condiciones especiales aplicables a cada una de las que subsistan."

Palacio de las Cortes, 6 de octubre de 1931.-
Enrique Ramos y Ramos, Esteban Mirasol Ruiz,
Gabriel Franco, Mariano Ansó, Fernando Coca,
Mariano Ruiz Funes, Gonzalo Figueroa.

Esta enmienda, hasta la fecha una de las más trascendentales que se someten a la Cámara constituyente, parece que va a ser votada, no solamente por la minoría de Acción Republicana, de la que parte, sino por la minoría radical y por otros grupos de la Cámara. Desde su nacimiento parece, pues, contar con probabilidades de triunfo.

Indudablemente, la enmienda está inspirada en principios que no desdennan ni el equilibrio ni la discreción. Señala vías que pueden conducir a la satisfacción de los extremistas y al sosiego de muchos españoles no extremistas que colaboraron con entusiasmo al advenimiento de la República y cooperan hoy a su consolidación.

Se propugna en la enmienda el complemento de un estatuto, después de la declaración del principio. Esto procuraría una pausa propicia a la meditación de la Cámara y al estudio de una ley sin rencor y sin virulencia. Por esta sola circunstancia es ya loable la enmienda. Ahora bien: sin que esto - dado lo impreciso del término "Corporación de Derecho público" - suponga por nuestra parte, una pretensión dogmática, nos permitimos señalar una contradicción, o al menos, una apariencia de contradicción, entre el término "Corporación de Derecho público" y la afirmación de que el Estado no prestará ninguna asistencia a la Iglesia.

Si la Corporación de Derecho público nace del seno mismo del Estado, parece que éste delega en ella funciones que le son propias y en ese caso no se entiende cómo una función delegada del Estado puede ejercerse sin la asistencia consiguiente.

Creemos que la Comisión asesora del Estatuto de Relaciones entre la Iglesia y el Estado tendrá una fórmula para salvar esto que nos dá la impresión de un equivoco.

Así, pues, bueno el principio general que informa la enmienda y justo el propósito de la Comisión asesora del Estatuto, no hay sino que felicitarse de este importantísimo paso dado hacia soluciones conciliatorias en problema tan quebradizo y delicado como el de las relaciones entre el Estado y la Iglesia.

9. - "1. Plan de acción parlamentaria. - 2. Táctica general (en defensa de la Compañía de Jesús)"

Iglesia y Eslat durant la segona República espanyola, I, págs. 160-163.

1. PLAN DE ACCIÓN PARLAMENTARIA

1.º - Desistimiento por parte de D. Ramón Molina, o de cualquier otro sacerdote, de continuar un turno en contra de la Constitución en la discusión de la totalidad.

En todo caso hubiera de ser un laico, y no en sentido exclusivamente religioso, sino bajo el punto de vista general de espiritualismo y del derecho cristiano, en los diversos aspectos sociales y políticos comprendidos en la Constitución, sin olvidar el aspecto de técnica jurídica.

2.º - Artículo 3.º del Título preliminar

Voto particular del Sr. Gil Robles, pidiendo la supresión pura y simple.

Intervención del Sr. Fanfari, afirmando la doctrina católica como tesis del derecho cristiano, y preparando la conciliación apoyada en los textos de las *Lex Sacerdotale* *Dei* y *liberius*.

Proponer que D. Angel Ossorio renuncie y defienda su voto particular al siguiente precepto: *cuya forma era: "No existe religion oficial del Estado, el cual amparara la libertad de cultos; pero inspirará su actuación y su legislación en las normas de la moral cristiana."*

Presentación y defensa, por un laico de prestigio intelectual, independiente de las derechas, de la siguiente enmienda:

No existe religion oficial del Estado. Se reconoce, empero, la efectiva importancia social que la Religion Católica tiene en España.

3.º - Artículos 24 y 25 del Título 3.º

Sostenimiento de los votos particulares del Sr. Gil Robles.

Por el mismo, o por alguna breve y discreta intervención de eclesiásticos o de laicos de la derecha, hagase afirmación de la doctrina total de la Iglesia en tesis y en hipótesis. Esta afirmación íntegra de la doctrina católica serviría para dejar en buen lugar la posición de la Iglesia frente al extremismo integrista de algun diputado que, como el Sr. Estevanez p.e., no dejara de proclamario.

Posición definitiva. - Presentación y defensa de las respectivas enmiendas juntas en hoja aparte.

Estas enmiendas debieran ser las que suscribieran un número importante de diputados de diversas facciones, y del que fueran los más destacados: Marañón, Ortega Gasset, Chamuán, Sánchez Román, Ossorio, Sánchez Guerra, Abadía, Carner, Hurtado, y alguno muy directamente unido al Presidente, y, ser posible, alguno del partido radical.

Los diputados pertenecientes a las derechas, más que suscribirlas, debieran aceptarlas, por declaración del Sr. Gil Robles con preferencia a un vasco o a otro agrario.

2. TÁCTICA GENERAL (EN DEFENSA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS)

Como me inspiraba de J. María Vidal y Barri que, para probablemente amb la máquina del Sr. Vilaplana.

A) *Si no atacan a la Compañía.* - Permanecer en lo convenido, supuesto que se hayan defendido bien las enmiendas referentes a la cuestión religiosa.

B) *Si atacan a la Compañía.* - Defendernos según el programa detallado.

C) *Si la defensa fracasase.* - 1) Propugnar que se difiera la solución del asunto para una ley especial, posterior a la Constitución; o bien para el

Concordato. 2) Provocar el recurso al Tribunal de La Haya, si esto es posible.
De la adversidad en último término, seguros de que, bien organizada, dará el triunfo.

Plan de la defensa de la Compañía.

1) *Cartasco.* Puede rechazar las acusaciones referentes a la colaboración con la Dictadura, Primo de Rivera contra el Norte, Cataluña y Madrid, en diversas ocasiones. Como detalles pueden recordarse los siguientes: a) Primo de Rivera se empeñó en hacer Asambleas a los PP. Pérez del Pulgar, Rodés y Güenechea, nunca se aceptó la propuesta, que fue desechada. b) Los artilleros tenían en la Iglesia de la calle de la Plaz su Congregación y se celebró con un solemne Te Deum y otros cultos el triunfo de los artilleros sobre Primo de Rivera. c) Entre los Caballeros del Pilar eran muchos los enemigos del Dictador, y sin embargo jamás tuvieron queja de que allí se hacía política, como nunca se ha hecho en las casas de jesuitas. d) El P. Pulgar recibió la medalla de oro del Trabajo pedida por más de 8.000 obreros, y hasta en la Casa del Pueblo se recogieron firmas para ello; entre las firmas hubo muchísimas de socialistas, puestas en sus valieres, y que ni siquiera eran discípulos del P. Pulgar. e) En el colegio de Alberto Aguilera se educaban un sobrino de Marañón, unos amigos de Azáña, etc., y sin testigos de que allí, como en las demás casas de la Compañía, no se trataba de política; es más, se sabe que aquellos señores procuraron enterarse de ello y vieron que era verdad.

2) *Gil y Gil.* Defensa de cultura. (PP. Herrera y Alonso).

3) *Horn o Aguirre.* Parte Constitucional.

a) Naciones que excluyen la Compañía: Noruega y Suiza: causas, etc.

b) Todas las demás, derecho común. (P. Izaga).

Acusaciones. Políticos: nacionalistas o separatistas: Intrusos. Riquezas Poder, Impopularidad.

4) *Unamuno.* El gesto.

10.- 15 de octubre de 1931. Los diputados católicos a la opinión.

Esquela : Estat durant la segona República espanyola, II, págs. 405-407.

Al tomar la grave resolución de apartarnos de las tareas constituyentes de la Cámara, creemos obligación ineludible explicar a nuestros electores y a la opinión en general los motivos que inspiran nuestra conducta.

Logramos nuestras actas en lucha dura, muchas veces violenta, en instantes en que la fiebre revolucionaria oponía obstáculos poderosos a la actuación de las fuerzas que representamos. Vinimos al Parlamento en tan difíciles circunstancias con ánimo patente de colaboración y de concordia. Si nuestro número era insuficiente para triunfar de las fuerzas coaligadas contrarias a nuestra significación, bastaba, sin embargo, para realizar con fruto una labor de oposición y acaso de obstrucción a la política del Gobierno. No lo hicimos, con la vista fija tan sólo en el bien de la colectividad; sacrificamos puntos de vista particulares y sentimientos muy hondos para realizar una obra de concordia. En las Comisiones desarrollamos un intenso trabajo de aportación y de estudio, y en el salón de sesiones una labor serena de crítica y discusión, sin derivar por los cauces agresivos a que nos incitaba la actitud desconsiderada de los grupos gobernantes, que muchas veces procuró ahogar la legítima expresión de nuestras opiniones.

Fueron estas Cortes elegidas como último resultado de una propaganda revolucionaria, hechas con la promesa explícita de los jefes del movimiento de que la República sería absolutamente respetuosa con los sentimientos religiosos del país.

Esto motivó, sin duda, la votación en las elecciones de concejales de 12 de Abril, en la que buena parte de la masa neutra se inclinó en contra del régimen político entonces imperante, acogiénzose en realidad a un pacto implícito, al que se ha fallado desde el Gobierno, pues sus elementos derechistas no han salvado la posición doctrinal que sustentaron en su propaganda revolucionaria.

La intransigencia de las Cortes y su divorcio del sentir del pueblo, manifestados en el criterio relativo a la propiedad, la familia, la enseñanza y aun a los fundamentos mismos de la ordenación social, común a los pueblos civilizados, con daño enorme para la economía general y para la paz pública, ha culminado en los preceptos relativos a la cuestión religiosa.

El acuerdo de los núcleos de mayoría dio por resultado la redacción de un artículo netamente persecutorio, disfrazado con apariencias de medida salvadora del régimen. Su última redacción fue preparada sin citar y sin oír a nuestros representantes en la Comisión constitucional, que tantas pruebas tenían dadas de laboriosidad y buena disposición. Sin darnos más que unos minutos para la presentación de enmiendas, sin someter el nuevo dictamen a la tramitación normal reglamentaria, tuvimos que afrontar la discusión de tema tan vital para nosotros. Y durante muchas horas, hubimos de librar la batalla más dura que se ha conocido en estas Cortes, mientras la Comisión y el Gobierno no se dignaba siquiera contestar a nuestros argumentos y las mayorías arrojaban en su conocida hostilidad. Al final, una votación en que apenas tomaron parte la mitad de los miembros de la Cámara, ha llevado a la ley fundamental de la República una medida violenta y odiosa, que verá con sonrojo el mundo civilizado.

Con ella se han rechazado hasta aquellas soluciones, no de tesis, sino de máxima concusión, presentadas por algunos de nosotros, y en las cuales quedaba a salvo la libertad de conciencia, que tanto se ha invocado, la separación de la Iglesia y el Estado, y el sometimiento de los Ordenes y Congregaciones religiosas a sus leyes generales.

Denegado a la Iglesia católica y a sus Instituciones un régimen de derecho común de simple ciudadanía, con quebranto de los más elementales derechos del hombre, la obra constitucional en ese punto quedará condenada hasta por las conciencias laicas verdaderamente liberales.

Hemos llegado al límite de nuestra transigencia. La Constitución que va a aprobarse no puede ser nuestra.

La opinión católica, que es la mayoría del país, la rechaza, y nosotros, que así lo proclamamos, no podemos prestar a la ley que se proyecta ni aun la mínima colaboración negativa de la presencia en el salón de sesiones.

La Constitución, contraria en los puntos que señalamos a la Justicia, opuesta al sentir general, tiene un vicio de origen que nosotros desde ahora denunciaremos.

La opinión que representamos no la acepta. Nosotros levantamos ya desde ahora, dentro de la ley, la bandera de su revisión. Si en las Cortes nos desentendemos del problema, lo llevamos sin rebozo ante la opinión en una intensa campaña que desde ahora iniciamos.

Fundidos en un ideal común, hombres que no abdicamos de nuestras particulares convicciones, dirigimos a los católicos un llamamiento enérgico y apremiante a la acción. La Constitución política, nutrida de espíritu sectario, no existe para nosotros. Frente a ella, todos unidos como hermanos.

No abandonamos nuestros puestos de combate. Cuando las circunstancias lo requieran, desde nuestros escaños levantaremos la voz en defensa de nuestros ideales.

Pero de momento, el esfuerzo que estérilmente habríamos de desarrollar en la elaboración de una Constitución antirreligiosa y antisocial, lo emplearemos en mover a la opinión contra ella.

Nuestra campaña, eminentemente popular, queda abierta desde ahora.

Palacio del Congreso, 15 de Octubre de 1931.

Firman: José Martínez de Velasco (Burgos); Joaquín Beñuza (Navarra); Aurelio Gómez (Burgos); Abilio Calderón (Palencia); José María Cid (Zamora); Ramón de la Cuesta (Burgos); José María Gil Robles (Salamanca); Pedro Sainz Rodríguez (Santander); Santiago Guallar (Zaragoza, capital); Tomás Alorzo de Armiño (Burgos); Rufino Cano de Rueda (Segovia); Ramón Molina (Toledo); Andrés de Arroyo (Tenerife); Joaquín Fanjul (Cuenca); Ricardo Gómez Rojí (Burgos); Dimas de Madariaga (Toledo); Lauro Fernández (Santander); Ricardo Cortes (Palencia); conde de Rodezno (Navarra); Miguel Gortari (Navarra); Rafael Aizpún (Navarra); José Ayats (Gerona); Manuel de Eguileor (Bilbao); José Antonio de Aguirre (Navarra); M. Robles (Vizcaya); José Luis de Oriol (Alava); Antonio de Pildain (Guipúzcoa); Jesús María de Leizaola (Guipúzcoa); Julio de Urquijo (Guipúzcoa); Rafael Picavea (Guipúzcoa); Pedro Martín (Valladolid); José María L. de Clairac (Sakunnet); Gregorio Arranz (Soria); José Horn Arelliza (Bilbao); Marcelino Oreja Elsosegui (Vizcaya); Bastienrechea (Vizcaya); Modesto Gosalvez (Cuenca); Cándido Casanueva y Gorjon (Salamanca).

Los diputados que suscriben no cumplirán sus deberes de conciencia, como ciudadanos del Estado español y como católicos, si no se solidarizan, ante el país, como ya lo han hecho ante la Cámara, con los firmantes del precedente manifiesto en la parte que se refiere al propósito de obtener por vías legales la revisión del precepto constitucional que dio una solución antijurídica a problema religioso, si bien se reservan acomodar su futura actuación dentro del Parlamento a las circunstancias que en cada caso requieran los demás intereses de los electores cuya representación ostentan en estas Cortes.

Firman: Manuel Carrasco Formiguera (Gerona); Benito Blanco-Rajoy Espada (Coruña); Luis Cornide Quiroga (Coruña); José Reino Caamaño (Coruña); Ramón Otero Pedrayo (Orense); Raimundo de Abadal y Caldero (Barcelona); Juan Estelrich (Gerona); Antonio Royo Villanova (Valladolid).

11.- Discurso de Ortega y Gasset en los debates del proyecto de Constitución - intervención de 4 de septiembre de 1931.

"El Sol", 5 de septiembre de 1931.

Unas palabras sobre el tema eclesiástico.

Ese Estado robusto, capaz de habérselas con las grandes organizaciones sociales del tiempo, tiene que encontrarse también frente a la Iglesia. Deslicemos, pues, solo unas palabras sobre el tema eclesiástico. Rechazo la sospecha por parte de ustedes de que voy a tratarlo debidamente; en modo alguno. Voy a decir sólo unas palabras para que no quede su hueco en el mosaico que ha resultado mi discurso. Habremos de hablar de ello a fondo, como merece, cuando se discuta el artículo. La separación de la Iglesia y el Estado es un fruto que el tiempo ha hecho madurar y se cae solo del árbol. No pocos católicos postulaban también, y espero que sobre ello no se levante disputa mayor. Pero el artículo donde la Constitución legisla sobre la Iglesia me parece de gran improcedencia, y es un ejemplo de aquellos cartuchos detonantes a que yo me refería en el comienzo de mis palabras. Se habla allí de disolver las Ordenes religiosas, y, aparte de si es o no discreta tal operación, yo encuentro que hay que hacer a ese artículo un advertencia previa.

En una Constitución no deben quedar sino aquellas normas permanentes de la existencia civil, y no decisiones fungibles que se consumen al primer uso. Una vez practicada esa disolución, esta línea constitucional queda para siempre muerta. Y esto no es que sea grave, pero si es un síntoma de que no es este su lugar. De otro modo, la Constitución, que debe ser pura vida viviente y plena actuación, arrastraría cadáveres y cadáveres, y en vez de ser solo vida del instante, renaciendo siempre de sí misma, estaría cargada del esqueleto de la Historia ya cumplida. Todo esto, ¿no os indica que, aparte la cuestión de fondo, no es ese el lugar donde deban estar tal decreto y tal designio?

Pero, aparte de esto, yo dudo mucho que sea la mejor manera para curarse de tan largo pasado como es la historia del Estado eclesiástico en España, del Estado-Iglesia, esas liquidaciones subitáneas; no creo en esa táctica para combatir

el pasado. El pasado es astuto y sutil, mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando queremos herirle fogosos, su cuerpo espectral queda indemne, y luego vuelve a ahogarnos con sus múltiples lazos visibles. Cada palabra, señores, y esto lo sabe muy bien el que escribe y aspira a alguna originalidad, es un pasado que nos impone viejas "turbas de pensamientos.

No; no es ese el modo de librarse del pasado. Para el mal del pasado no queda sino una digestión histórica, y es preciso que hoy en nuestra Constitución no hagamos sino disponer ese futuro de noble combate histórico con el poder eclesiástico. Por eso nosotros, que coincidimos en gran parte con lo que dijo en su discurso el Sr. Zulueta, aprontamos al problema por el planteado una solución. El Estado, en efecto, no puede quedar con la Iglesia ante sí convertida en una asociación privada como cualquier otra. Así, no tendrán, por un lado, el respeto debido a esa unidad histórica, que es la Iglesia española; pero por otro, tampoco las defensas suficientes frente a ella el Estado español.

La Iglesia es un poder muy complejo: es una organización internacional. Puede decirse de ella lo que de una Orden religiosa decía en el siglo XVIII el abate Galiano: "La Iglesia católica es una espada que tiene el puño en Roma y la punta en todas partes." Con una fuerza así hay que actuar con nobleza, por las fuerzas del pasado que representa; pero, además, con cautela. Por eso nosotros propondríamos que la Iglesia, en la Constitución, aparezca situada en una forma algo parecida a lo que los juristas llaman una Corporación de Derecho público, que permita al Estado conservar jurisdicción sobre su temporalidad. (Muy bien).

12.- "Nuestro problema religioso"

"El Sol". 11 de septiembre de 1931.

Don Fernando de los Rios, en su magnifico discurso defendiendo la totalidad del proyecto de Constitucion, ha puesto a prueba la sensibilidad tradicionalista de los diputados. Es decir, ha demostrado que un tropo, una metáfora, un juego, retorico, en torno al pasado histórico nacional, conmueve lo mismo a un integrista que a un radical socialista. Castilla, los conquistadores de América, las posibilidades presentes y futuras del país no más que en virtud de las raíces del pasado... Y ante estos recursos, hoy como ayer, las manos que se juntan para aplaudir. Esto es interesante como síntoma. Como síntoma de que nuestros revolucionarios aun se humedecen de lagrimas ante la evocacion del pasado, y que si en Pascua Florida no comulgan, no por ello dejan de conmemorarla con cordero pascual; que son tradicionalistas, en suma.

Tal fenómeno nos obliga a ser prudentes en las decisiones cuando hayamos de decidir sobre la tradición. Que los pueblos viejos son un bosque lleno de raíces, en el que, al quitar el vuelo, la hojarasca, creen muchos que lo han quitado todo. Mas aquí ni la hojarasca siquiera ya que la retórica es hojarasca, y a nosotros aun la retórica tradicionalista nos conmueve. En estas condiciones se va a discutir, y ya se está discutiendo, el problema religioso ¿Problema? ¿Cuántos diputados del actual Parlamento están sin bautizar? ¿En qué país del mundo podemos ver la población disidente de los muertos como en nuestro país? Esas breves tapias del cementerio civil, ese cuadrado de tierra librepensadora que muchas ciudades españolas ni siquiera han tenido necesidad de limitar?

Puede ser que en España no se reúnan cinco hectáreas de librepensamiento. Seria también muy curioso el censo de los librepensadores que a la hora de la muerte llamaron al obispo. He aquí el síntoma católico más culminante: el del terror al infierno. El párroco, a la puerta del librepensador moribundo, y sus hijos, los jóvenes librepensadores, defendiendo la entrada por temor de que el padre, en un acceso de debilidad, se confiese, o, si trata de resistirse, se muera del susto.

Todo esto no es, en el fondo, sino catolicismo. El librepensador español no logra verse libre de la preocupación católica, y todos, en uno y otro bando, con una inefable irreligiosidad. No hay sentimiento religioso en España, y no le hay porque en el curso de muchos siglos de lucha religiosa el español ha perdido la despreocupación del pensamiento; el desinterés de pensamiento. Los problemas intelectuales entre nosotros son problemas de ajedrez. Hay que dar mate al adversario y aprovecharse para ello incluso de sus debilidades y distracciones. En los últimos tiempos toda la lucha religiosa española se ha reducido, en una y otra parte, a explotar un copioso repertorio de anécdotas. Grave conflicto en el librepensador obeso, cuando tiene que reforzar su propaganda diciendo que los frailes son gordos. De esta manera tan simple y tan pueril se han frustrado tantos intentos de descatalogización. Los argumentos no han variado, ¿desde cuando? Es inocente pensar que una ley, por sabia que sea, puede roturar esta monte de la tradición española. Puede, de la noche a la mañana, dejar limpio de raíces el solar. Y de todas las raíces. No solamente de raíces de dogmas, de disciplina, de ritos, sino de raíces de Historia. "Yo soy muy católico, dicen algunos; pero enemigo del clericalismo." Como si esto fuese posible; como si esta distinción pudiera hacerse. Y otros, "la religión no dene meterse en política". Como si a un organismo de carácter universal, católica, el único organismo para el que no existen fronteras, y que del latín ha hecho su esperanto, se le pudiera separar de la vida civil, de los intereses civiles, de la economía, de la guerra, de la cultura... Este desarraigo exige otra táctica. Quizá corresponda integralmente a la pedagogía. A producir un ciudadano que, en punto a confesiones, lea con el mismo desinterés, y con la misma pasión humana, las de San Agustín que las de Juan Jacobo. Y esto en un pueblo español ¿es posible? Y si es posible, ¿cuando tendremos los maestros para realizarlo? Porque puede no ser difícil que la cera deje de arder en honor de un santo religioso; pero quizá sea más fácil que se encienda un holocausto de un santo laico. Quizá en España no ha habido liberales porque nuestros abuelos hicieron de la libertad un dogma. El culto a la libertad. Ello no era sino una profesión de antiliberalismo. Y así nuestra iconografía liberalizante ha tenido en el curso de un siglo constantemente velas encendidas, y aun se ha esperado de ella la aparición sobrenatural y el milagro. Ahora nos hallamos

de nuevo en trance de milagro, y la biblia que ha de mover este milagro es la Constitución.

Inocente espejismo en tanto que las raíces milenarias, que han subsistido a todas las resistencias, sigan entretejiéndose en el subsuelo nacional. En otros países que creyeron haberlas extirpado para siempre las hemos visto renacer. *Eilo es un problema de civilización.* Aquí, entre nosotros, no solo de civilización católica, sino de civilización grecolatina. Rotos los mitos paganos, aun los dioses griegos nos siguen emocionando en los jardines, y por motivos extrahumanos. "Hay que defender nuestro tesoro artístico", propugnan ahora aun los más radicales. ¿Que significa defender un cuadro, una estatua, un libro, un edificio?... Significa defender una cultura. Y aquí, en España, precisamente, una cultura católica.

Francisco DE COSSIO

13.- "Ante la cuestión religiosa."

"Ahora", 30 de septiembre de 1931.

En las deliberaciones de las Constituyentes cada vez se abre más camino la convicción de que un Código fundamental ha de ser una obra de transigencia y no una imposición de mayorías. Lo que a propósito de un punto concreto ha dicho el jefe del Gobierno: "aquí no hay vencedores ni vencidos", ha de aplicarse a la obra general de las Constituyentes. No se trata de reñir una batalla, sino de elaborar un cauce lo bastante amplio para que pueda fluir por él la vida entera del país con todas sus variedades.

Ayer ha dado la Cámara una muestra de buen sentido rechazando una enmienda, desatentada e inoportuna, en la que se pedía que quedaran excluidos de los derechos de ciudadanía los que hubiesen hecho votos religiosos. La enmienda pertenece al ambiente de ese radicalismo palabrero al alcance de todas las fortunas que buscan una popularidad fácil azuzando bajos rencores. Pues bien; la Cámara rechazó la propuesta, dando así muestras del espíritu constructivo que la anima.

El hecho tiene una gran importancia en vísperas de la discusión de los artículos del proyecto referentes a la religión, y hace esperar que también en este tema delicado la Cámara sabrá dar muestras del espíritu de transigencia que ha mostrado en otras cuestiones. Ningún interés tiene la República en desatar la pasión religiosa, exacerbando el sentimiento católico. Son oya bastantes los motivos de división que enconan la vida nacional para que un extremismo imprudente venga a añadir uno más.

El ambiente, afortunadamente, no es de guerra. Desde el primer momento los católicos españoles han sabido colocarse en una actitud prudente que facilita la avenencia. Responder a ella con medidas de radicalismo anticlerical sería intempestivo y lamentable. Afortunadamente van dominando en la Cámara temperamentos de templanza que coinciden con la conducta, en general, moderada y transigente, que está observando en este punto el Gobierno. Si se les da un régimen aceptable, los católicos españoles no tendrán inconveniente en colaborar lealmente con la República. En sus relaciones con Francia, por

ejemplo, la Iglesia ha demostrado que sabe abordar con espíritu de conciliación situaciones delicadas para ella. El que haya una minoría intransigente que se obstina en no reconocer las exigencias del momento, nada importa. La gran masa creyente lo que desea es un régimen de amplia tolerancia que le permita trabajar por el bien del país. Nada ha de ganar la República heriendo, sentimientos venerables y concitándose así la hostilidad del pueblo católico y dando a su Constitución un matiz sectario en pugna con el carácter ampliamente racional que debe distinguirla. El "hecho" religioso español es una realidad que nadie puede desconocer y que sería insensato herir por un vano afán de radicalismo nuevo.

14. "El debate religioso".

"El Sol". 30 de septiembre de 1931.

El Parlamento ha acordado diferir hasta la semana próxima la discusión del problema religioso. Cuantos intervengan en el debate habrán de vigilarse y de exigirse mucho. El problema no puede ser tratado sin elevación en la Cámara.

No se nos atribuya moderación interesada si pedimos a todos, no ciencia canónica, pero sí tolerancia y cautela. Imiten la flexibilidad con que el Gobierno ha acudido al diálogo con el nuncio de Su Santidad, monseñor Tedeschini. Un debate religioso no admite la vehemencia sino atemperada por la cortesía, que sube del corazón a la frente.

El nuncio, por su parte, ha llevado a la negociación la ductilidad y la perspicacia indispensables. Viene monseñor Tedeschini acreditando estas dotes desde que servía a la Curia Vaticana en el grupo "del tré", con monseñor Cerretti, luego nuncio en París, y monseñor Pacelli, luego nuncio en Berlín. El diálogo entre el nuncio y el Gobierno es antecedente invocable, cuando se aconseja a la Cámara serenidad y nobleza en la discusión de un problema que absorbe a los entendimientos más finos y mejor conformados de Europa.

La unidad del Estado nace aquí de la fe, que milita y vierte su ardor durante siglos en la cultura hispánica.

Ya este hecho, se este o no con la Iglesia, confiere a la cuestión que va a debatirse linaje intelectual y altura.

Esperemos que la Cámara extienda sus precauciones y no hiera en su intimidad mas acendrada a millares y millares de españoles. Tolerancia en todos y para todos. Preconicemos esta gran virtud.

15.- "La reacción, el cura y la mujer."

"El Sol", 3 de octubre de 1931.

"La mujer está dominada por el cura." "El cura es la mujer al revés en el comportamiento." "El sufragio femenino pondrá en peligro la República."

(Tópicos de actualidad)

En sesenta y cuatro y cinco diputados y dos diputadas. Cerca de cuatrocientos se llaman de "ideas avanzadas". El resto defiende lo que queda de los viejos. Desconociendo las mujeres de extrema derecha y las socialistas. Saben estos que la mujer votadora votará con ellos. Pero los señalan que el sufragio no da a las mujeres los favores, sino que los extremos mucho más de la mitad de la Cámara. Representan a cientos de miles, también de "ideas avanzadas", puesto que las votaron.

Y en fin, son esposos, madres, hermanas o hijos de los diputados y de los electores. Demos de lado a los familiares femeninos de los electores de los diputados de la extrema derecha y de los socialistas. Quedan los núcleos femeninos de los cientos de miles de electores burgueses, pero "de ideas avanzadas". A estos núcleos tienen miedo los diputados. Esos hombres—los diputados—están convencidos de que entre ellos y las mujeres de sus familias y las de sus electores se interpone otro hombre—el cura—por el cual ellos se confiesan vencidos. Pero entonces no deberían presentarse ante sus electores como capaces de luchar por favorecidos, cuando tan fáciles de vencer son.

¿O que por la sugerencia misericorde e hipódico emana del confesor cura o frente ante el cual el marido, el padre, el hijo o el hermano nada pueden?

Lo que ocurre con esos diputados burgueses, representantes de

electores burgueses, es que para ellos las mujeres de su hogar han

siempre seres domésticos encargados de cumplir diversas funcio-

nes, todas encaminadas a la mayor comodidad de "los hombres de

la casa".

Si una mujer pensaba, sufría, tenía anhelos de justicia, con-

ciencia social, ellos lo ignoraban, o prohibían como impropia de mu-

jer cualquier manifestación espiritual. La mujer burguesa en Es-

paña no trata con más hombres que los de su familia. El intercam-

bio espiritual—tan necesario y tan justo—con individuos de otro sexo

le está vedado. El único hombre con quien puede hablar sin reparo

es el confesor. Y en el silencio su espíritu la mujer de la clase media,

asi siempre poco cultivada, fácil a la superstición y nada acostumbrada

a razonar. El mismo fenómeno en sentido inverso se daba si los

hombres pudieran confesar. Y eso que el hombre se cree fuerte

contra la superstición y "ente de razón".

Si los burgueses trataron la República, las burguesas no la destrui-

rán. Que esos diputados timoratos se ocupen un poco más cada uno

de las mujeres de su familia y recomienden lo mismo a sus electores.

Y no se pongan histéricos. Seguramente el voto de las mujeres pro-

ducirá el mismo resultado que produjo el de los burgueses. Y aun en

caso, cuando contribuyeron indirectamente las mujeres. No hay que

recelar de las bestias. Tan entretenida es la propaganda electoral como

la catimpea. Y mucho más variada.

Matilde HUIZI

16. - Comentarios. - El confesionario y las mujeres de España.

Por Don Miguel de Unamuno.

El Sol, 4 de octubre de 1931.

¡Buenos a Dios! Aquí, en el re-
fugio—y ¿qué no es relativo, in-
cluso la misma relatividad!—se-
gundo de este remanso espiritual de mi
república Salimanca; aquí, a la vie-
ta de Gredos, copinado—roastio—
control de España, vuelvo a sentir
el empuje de la savia que sube de
las raíces de la racionalidad.
Aquí, lejos del recuento o coto del
doloroso altercado por forcejeo
de patillos macabros. Pero aquí
empiezo a dudar de si yo, que he
vivido más años de vida en España,
conozco a ésta. Y además, si no
siento, como no soy, un soltero—es
decir, un solitario—, sino un padre
de familia, y habiendo convivido
con mujeres españolas, tengo algu-
na experiencia de lo que éstas
sienten. Porque, a proporción de eso del
voto a la mujer, se ha oído cada
vez.

Primero ese antojo histórico
manejado de que la mujer española
está manejada, desde el confe-
sionario, por el clero regular o se-
cular, antojo histórico de la mas-
culinidad aquella a que se refirió
un día el dictador Primo de Rive-
ra. En algunos de estos casos es
Don Juan que siente celos—y re-
celos—de los confesores de sus vic-
timas. O victimarias. Y sabido es
que Don Juan, profundamente es-
pañol, es tanto como un sensual un
envidioso. Y que apenas sabe nada
de confesionario.

La leyenda del confesionario!
No ese confesionario, con sus casos
de conciencia, de donde surgió, si-

glos antes de que apareciera el ju-
dío Freud, el psicoanálisis. En el
confesionario, en el de Tirso de
Molina, fué ya estudiado Don
Juan, el de "¡si tan largo me lo
fiatal!", y en ese mismo confe-
sionario fué estudiado el condenado
por desconfiado. Y en ese confe-
sionario se ha estudiado, no la mal-
dad, sino la estupidez humana. El
estudio de los corréptulos es algo
para inspirar más triste pesimi-
mo misantrópico que el que tortu-
ra al ánimo de Gustavo Flaubert,
el inmortal autor de los Inmorta-
les Boulevard, Pecuchet y M. Ho-
mans. Y si M. Homais aborrece
tanto el confesionario es porque
desde él se descubre toda su va-
riedad y su incapacidad radical de
hacerse con su madre, con su her-
mana, con su mujer, con su hijo,
con su amiga. Y en cuanto a Ma-
dama Bovary, ¿va a confesarse a
M. Homais?

¡El confesionario! ¿Quién puede
afirmar en serio que las mujeres
españolas de hoy, las que se con-
fiesan, son manejadas desde el con-
fesionario? ¿Manejadas? ¡Acto son
ellas las que desde allí se manejan!
Hay además que distinguir el con-
fesor que podríamos llamar litur-
gico o de rutina, el que oye—el es
que oye—lo que la confiesan como
quien oye llover, y el director de
conciencia. ¡Y cuántos hay de és-
tos? Al pobre M. Homais los des-
dos se le antejan huéspedes. Pero
¿qué mujer va a verter sus culpas
a su pies?

Sostener, afirmar, que desde el confesionario haga el deber, peculiar o regular, la campaña política, derechista o antirrepublicana, es moverse en puro confusiónismo, sin definición clara ni de confesionario, ni de deber, ni de campaña, ni de política, ni de derecha, ni de República. ¿Qué mal conocen a sus mujeres los que tales caminos profesan y confiesan? A las suyas propias, ¡claro!, que a las de los otros no las conocen ni bien ni mal. Y menos aún a las que alguna vez les dieron calabazas, y no ciertamente por sugestión del confesor. Similitud *monstruosa*.

Queda el punto central, íntimo, el de la satisfacción de las necesidades religiosas de la mujer española. Necesidades que, por su género de vida, puede llenar de otro modo el hombre, si es que las tiene. La religión, cualquier verdadera religión—que no se iguala que religión verdadera—ocurre a consolarle al hombre de haber nacido dándole una finalidad de vida que trasciende de la vida misma, y así, independientemente del temor de castigos o la esperanza de premios, refrenándole de las malas pasiones que no atienden a esa finalidad. Que no en la religión ni podría ni anillo de azar industrial. Pero el el pobre M. Homais, el el cándido librepensador—arazo porque se libra de pensar—se dueña de la forma de religión en que se le ha edu-

cado a la que ha de ser su mujer. ¿Quién tiene la culpa de ello sino él y sus condescendencias que no han sabido, por irresponsable casualidad, cambiar esa forma, a una reformatoria? Porque en concreto, y con referencia a nuestra España viva y actual, se locura pensar que como concuerda con el cristianismo español, nacional, popular, laico, el de los cultos sencillos, el que es a la vez que una religión un arte, el verdadero arte popular español. No se concilia con una religión que da vida espiritual a un pueblo, que es popular, esto es: laica, y nacional. Cabe reformarla. ¿Y qué entiende el pobre M. Homais de reforma?

Ved, en cambio, que los que han hecho de la reforma social una especie de religión—¿qué sino una religión es hoy el leninismo en Rusia?—no tienen que otros confesiones que ellos mismos se adueñan de sus mujeres. Ni han de aligerar este temor las creyentes en la fuerza íntima del cristianismo nacional, popular, laico, de España, reformado o sin reformar todavía. Que es muy fácil declarar que no hay religión del Estado, pero no es tan harto probar que no haya una religión de la nación por poco definidas que se supongan sus creencias radicales. Creencias radicales que han de incluir siempre en el voto de aquellas mujeres que sientan necesidades religiosas que M. Homais no satisface.

17.- 3-7 de diciembre de 1931. Los metropolitanos a Pío XI.

Esglesia : Estal durant la segona Republica espanyola, II, págs. 205-213.

Fiesta de San Francisco Javier, Diciembre de 1931.

Santísimo Padre:

Con total obsequio y voluntad fidelísima a los designios de Vuestra Santidad, se ha tenido en Madrid la Conferencia de los Metropolitanos españoles, cuyos acuerdos y justificación explicativa han sido comunicados, como de ordinario, a la Secretaría de Estado, en debido sometimiento al supremo beneplácito de Vuestra Santidad.

En razón, empero, del angustioso estado de la Iglesia en España, que tan hondamente aflige a vuestro paternal corazón, creemos deber especial nuestro, en estas circunstancias, manifestar a Vuestra Santidad, en intimidad y reserva reverentes, la visión concorde de la realidad en nuestro país, que nos ha permitido formar la observación directa de cada uno y la aportación informativa de todos a las deliberaciones de la mencionada Conferencia.

En el orden social la situación ofrece gravedad extraordinaria, que el fermento revolucionario, excitado por las facciones políticas, ha puesto de relieve, tanto y más de lo que ha contribuido a engendrarla. En las grandes ciudades el pueblo obrero está afiliado a las organizaciones anticristianas o muevese bajo su influencia. En la provincia de Sevilla 27.800 obreros pertenecen a la Confederación Nacional del Trabajo (C. N. T.), que practica la acción directa y aspira al sindicalismo libertario y anarquista; 33.000 constan ya entre los comunistas y afines. Este mismo sindicalismo, alrededor de 400.000, oprime a la población obrera de Cataluña, región la más industrial de España, y sólo la acción enérgica y sabia del Gobernador de Barcelona, católico excelente, ha podido impedir su hegemonía destructora. En Madrid, Bilbao, Granada y regiones mineras tiene el predominio la Unión General de Trabajadores (U. G. T.), la cual, muy bien organizada y políticamente dirigida por el partido socialista, constituye la espina dorsal del extremismo activo del actual régimen: sólo en la Diócesis de Jaén cuenta con 175.000 afiliados. En otros lugares, antes relativamente inmunes, Zaragoza, por ejemplo, sindicalistas y socialistas comparten la dirección del movimiento obrero. Por lo que a la agricultura se refiere, los asalariados del campo han caído, en su mayor parte, en manos del socialismo, que les enardece con extremas tendencias de reforma agraria. Aun en provincias como Palencia, Burgos, Segovia, Salamanca, Valladolid, intermedias entre las Vascongadas y Andalucía —partes extremas en mejor y peor estado social— se infiltra el socialismo entre los mismos pequeños propietarios, que están menos lejos de la influencia de la Iglesia. En todas partes, con mayor o menor rapidez y extensión, obsérvese el fenómeno del comunismo, arrayándose a los que ya militan en el sindicalismo y socialismo. Frente a tan grande mal, existen unos 3.000 sindicatos católicos agrarios, cuyo indispensable fomento choca hoy con mayores dificultades por el avance fácil del extremismo revolucionario. La masa obrera socialista y sindicalista es dócil a las inspiraciones de sus dirigentes, perturba hondamente la producción con frecuentes e inmotivadas huelgas y con facilidad se lanzaría a los mayores desmanes de todo género, respondiendo a las excitaciones que en la prensa o en el mitin les hacen sus irresponsables y explotadores dirigentes.

En el orden religioso, el cambio de régimen ha servido para exteriorizar realidades desconsoladoras, no desapercibidas antes en gran parte, y para precipitar tristes consecuencias de aquéllas, que sólo aguardaban momento favorable a su manifestación. En las grandes ciudades no pasa de 15 a 20 % el número de los que cumplen el precepto de la Misa y de Pascua; en las pequeñas ciudades y pueblos, que podemos considerar en

*buen estado, cumplen del 10 al 30 %, y siempre el elemento femenino da el mayor contingente. La recepción de los últimos Sacramentos, sobre todo en las ciudades, ofrece un porcentaje muy bajo. En algunas regiones, como Vascongadas y Navarra, de mayor homogeneidad social, y en algunas otras localidades, el porcentaje es más alto, pero ello no basta para modificar la visión del conjunto. Lo que se tenía por religiosidad española era el hecho de que, generalmente, los cuatro actos principales de la vida —nacimiento, primera Comunión, matrimonio y sepelio— tenían carácter cristiano. El oficialismo de la Religión, durante el pasado régimen, favorecía ciertamente la apariencia externa de la España Católica; pero, a través del estado legal, se notaba generalmente menos, sin pasar desapercibido el observador perspicaz, que el pueblo se apartaba de la Iglesia y que, en vez de considerarnos en posesión de una normalidad creyente a regir y administrar, debía tener la sensación de una reconquista espiritual vigorosa, que se imponía y que por muchos, en lo posible, se alentaba. La tradición social del Catolicismo deslumbraba en las solemnidades y procesiones típicas, pero el sentimiento religioso no era profundo y vital, las organizaciones militantes escasas, el espíritu católico no informaba de verdad y con constancia la vida pública, y aun los mismos derechos de la Iglesia, reconocidos por el Estado, no se podían ejercitar siempre con eficacia, como, por ejemplo, [en] la enseñanza religiosa de las escuelas oficiales, las obras de texto en los Centros docentes, ni en la provisión de Cátedras en personas de ideas avanzadas. La mayor actividad, que ha sido la labor docente de las Congregaciones, tal vez por defecto de las obras postescolares, de métodos adecuados o de personal apto, no producía el porcentaje de católicos militantes que era de presumir. La misma confianza en la permanencia del *statu quo* legal, que se acentuó durante los años de la Dictadura, fue una de las causas de que, al venir el cambio de régimen, no hubiese la necesaria preparación ni en el orden político-social, ni en el estrictamente religioso. Así, entre cerca de 500 diputados, solo quedaron firmes 59 votos de católicos para defenderse denodadamente contra el artículo 24 de la Constitución, cuya tendencia sectaria un pujante anticlericalismo iba preparando desde muchos años. Por el indiferentismo práctico latente se explica, en muchas partes, el abandono de bautismo, matrimonio y sepelio católico, hasta el punto de que llegue en algunos pueblos, y aun en alguna región, del 60 al 70 % desde el advenimiento del nuevo régimen. La reacción católica en los buenos es ciertamente una gran esperanza para tiempos mejores; pero la secularización de la vida pública, que ha comenzado, fomentará grandemente, en muchos, el alejamiento práctico de la Iglesia, de la que espiritualmente están ya apartados. En algunos pueblos se da el caso de que los elementos sectarios procuren que los afiliados a agrupaciones extremistas se comprometen a no bautizar a sus hijos y a no consentir el sepelio religioso de los suyos.*

En el orden político, la conjunción republicano-socialista ha podido dominar al nuevo régimen y dirigir la elaboración constitucional hacia el radicalismo, merced a la asimilación política de las masas proletarias, explotando en parte reales injusticias de las clases superiores y, sobre todo, enardeciendo el sentir revolucionario. Mientras duren las actuales Cortes, una rectificación profunda no será posible. El único factor optimista puede venir de la experiencia misma de los gobernantes, algunos de los cuales empiezan a temer las consecuencias de avanzar más en la ruta emprendida. De hecho existe hoy en la política española una pugna entre los socialistas y radicales socialistas, de una parte, que aspiran a un *extremismo perseverante*, y los demás partidos republicanos, de otra, los cuales se dan cuenta del peligro, y buscarían la mitigación progresiva del radicalismo actual, para la consolidación del régimen. La elevación de Alcalá Zamora a la Presidencia de la República puede inclinar la dinámica política hacia esta última tendencia, sobre todo si en las primeras elecciones —ahora previsibles para mayo del año próximo, o tal vez para octubre— la reacción antirrevolucionaria alcanzaba un éxito considerable. Habrá de favorecerla también la agravación de los problemas económicos y sociales y el malestar producido por múltiples desaciertos del Gobierno, por lo cual los elementos vitales de la producción y de los negocios retornan de su anterior pasividad; el aprovechamiento certero de tales estados de opinión ha de servir a los católicos para la mejora legal en favor de la Iglesia, que por solos motivos espirituales sería más lejana. Tal evolución deseable podría ser retardada por el desvío de elementos políticos que, por mirajes de cambios radicales y dictatoriales, intentasen complots y levantamientos monárquicos, los cuales producirían de nuevo el frente único republicano, sostenido aun

por el pueblo en armas —según es voz común, no faltan ellas a núcleos militantes del socialismo y del sindicalismo—, con el consiguiente riesgo para la Iglesia, puesto que, en parte con razón, en parte por táctica, no dejara de involucrarse a elementos católicos en tales movimientos. En España, las reacciones de radicalismos y dictadura, de sobrevenir, podrían dar entrada a un gravísimo momento caótico y anárquico; aun en el caso de triunfar una dictadura, difícilmente esta sería duradera, dada la situación actual del pueblo; y por ello, en previsión de cualquier eventualidad, todo miramiento es poco por parte de la Iglesia, a fin de que aparezca absolutamente desinteresada de todo movimiento político.

A las exigencias de tan complejas realidades se ha atemperado siempre nuestra conducta, atentos a que, por nuestra misión, hemos de fijarnos no en aspectos parciales de los problemas religioso-sociales, sino en el conjunto de las necesidades de la Iglesia, y contando con que, aun por gracia de estado, Dios nos asiste, a fin de que sepamos aunar la firmeza sobrenatural con la prudencia humana en la elección de los medios más aptos.

Advenido el nuevo régimen, fue clara y discreta la actitud de acatamiento al poder constituido, y se quitó toda razón para que la Iglesia fuese atacada como solidaria a una determinada forma de gobierno. Durante el período constituyente fue copiosa y enérgica la acción pastoral, ilustrando a los fieles acerca de los males del laicismo, elevando a las Cortes mensajes razonados de las Provincias eclesásticas en favor de los sagrados derechos de Dios y de las almas, promoviendo manifestaciones colectivas, y numerosas gestiones cerca de los parlamentarios. Iniciadas negociaciones entre la Santa Sede y el Gobierno, la Comisión de Metropolitanos las secundó por los medios a su alcance, mientras no dejaba de asistir a los católicos del Parlamento para la impugnación del proyecto sectario, y enardecía al Presidente Alcalá para llegar incluso a la crisis ministerial, si la concordia no era lealmente seguida. Ciertamente pudo más el sectarismo de las Cortes, y se votó el malhadado artículo 24; pero la Iglesia ha preparado el ánimo de toda persona ecuaníme para las futuras reivindicaciones, por su generosa actitud, comprensiva y pacificadora, en aquellos difíciles días.

Después del artículo 24, la soberana protesta de Vuestra Santidad tomó una dirección sapientísima, que el Episcopado reafirmó ante el país, y ha seguido fielmente, alentando a los católicos, en las diversas Diócesis, a múltiples actos colectivos de plegaria, de protesta, de propaganda, y no perdiendo jamás contacto con las entidades y directores del movimiento católico. Se fomentó la campaña revisionista, iniciada, como era natural, por los parlamentarios; pero, a fin de no atraer seguras dificultades a la Acción Católica, los Obispos no la han proclamado e instado oficialmente, por la inevitable mezcla de actitudes políticas que era seguro aparecería en los meetings; cuando el Gobierno la prohibió, se aconsejó e instó que los actos fueran de afirmación católica y pro libertad de enseñanza. Mientras tal se hacía en el movimiento católico exterior, no se descuidaba de favorecer actitudes parlamentarias que hicieran asquible la futura revisión constitucional, sabida imposible de momento por todo buen conocedor de la realidad. Efecto del doble actuar antes mencionado ha sido la modificación del artículo final de la Constitución, que ha de permitir, dentro de cinco años, una seria revisión, si todos los católicos unidos, y aprovechando certeramente la colaboración de todo factor favorable, saben impulsar la necesaria reacción electoral que ha de alejar del Parlamento la hegemonía sectaria. Para que el movimiento católico se desarrollara eficazmente, nada hemos omitido, incluso la paciencia silenciosa y la intervención moderadora, a fin de neutralizar el *extremismo integrista*, antiguo defecto español, el cual pretendía perturbar la campaña revisionista con radicalismos derrotistas y, con riesgo de la división de los católicos, desvirtuaba el prestigio de los mejores adalides de aquella causa, sin detenerse siquiera en la crítica ante la misma dignidad del Representante del Papa. Con igual celo vigilante se ha preparado el período postconstitucional; y, mientras la Conferencia de Madrid formulaba acuerdos oportunos, volvimos a tener contacto con el Gobierno —que había cesado después del artículo 24—, precisamente para protestar en favor de nuestros Hermanos

piejados de sus Sedes, y en contra de actos ministeriales lesivos para la Iglesia, y logramos anular la Orden del Ministro de Justicia que negaba la dotación a las parroquias vacantes, desde primero de Noviembre.

Pudríamos decir, Santísimo Padre, que nuestro más íntimo anhelo ha sido el usar todo medio apto, no descuidar ninguna industria oportuna, mover los dos brazos, emplear los dos métodos para una acción perfecta, o sea, mitigar los males inminentes y procurar toda ventaja posible, puesta la mirada en el bien completo y sin olvido de todo aquello que pareciera inmediatamente realizable o asequible. Tal proceder es en España más necesario, porque el temperamento meridional es propicio a la exaltación abstracta de lo mejor, y a menudo olvida las posibilidades de lo bueno; un heroísmo fugaz e irresponsable desearía rupturas absolutas y radicales, pero la razón y la experiencia obligan a no desatender por medios prácticos la preparación inmediata de días menos malos, que el apoyo prudente a la evolución politicosocial puede volver propicia para la Iglesia, a fin de mitigar desde luego los males que la afligen.

Pero, sobre todo, bien conocedores de los medios con que nos permiten contar las realidades arriba expuestas, y de lo mucho que hay que hacer en lo porvenir, dada la idiosincrasia del carácter español, creemos nuestro deber pastoral primordial e inmediato dirigir, activa y pacientemente, las actividades de todos hacia la restauración interna de la vida religiosa, y por ello hemos ya dado la voz de alerta en la reciente *Alocución a los fieles* para moverles a atender la más urgente necesidad, que es la substitución del presupuesto eclesiástico, creando normalmente por nosotros mismos el presupuesto social del culto, de la caridad y de la cultura espiritual, en que se ha de afianzar la independencia de la Iglesia: «... esperamos que el estado presente de cosas será estímulo poderoso para que todos, sacerdotes y fieles, rindamos más férvido homenaje a nuestra fe, redoblemos el apostolado, fortalezcamos la mentalidad y la conciencia católicas, alcancemos aquella renovación interior de idealismo religioso y de santidad propia, que en la paciencia expiatoria y en la elevación sobrenatural preparan las futuras energías con que hemos de producir la restauración cristiana de nuestra sociedad, y recobramos de tantos sopores y negligencias, con que se ha olvidado muchas veces el ahogar el mal con la abundancia del bien».

Tales decisivas orientaciones en defensa, por un lado, de los derechos de la Iglesia y, por otro, en adoctrinamiento de los católicos para el porvenir, serán expuestas en los Documentos colectivos acordados en la Conferencia de Madrid, y cuya eficacia no dejaba de depender de su oportunidad: el primero, luego de ser promulgado el texto constitucional, a fin de proclamar los derechos de la Religión, de la familia, de la enseñanza y de las Ordenes religiosas; el segundo para promover intensamente el espíritu y el apostolado de la Acción Católica, sin la cual carecería de base sobrenatural y de recta orientación el movimiento de los católicos en la vida pública. En tales documentos hemos de poner toda la emoción sagrada de nuestra responsabilidad jerárquica, y la conciencia firme y serena de los días históricos por que atravesamos, a fin de avanzar, cuanto este de nuestra parte, el día favorable del Señor para nuestra desdichada Patria. Mientras no llegue este día, no callarán los Pastores de Israel: ellos serán los firmes heraldos de la verdad, y los constantes evangelizadores de la caridad y la paz en el reino de Cristo, cuya difusión les está encomendada.

En estos momentos tan trascendentales hemos querido, Santísimo Padre, postrarnos otra vez a Vuestros pies sagrados, y decir a Vuestra Santidad toda la intimidad de nuestro pensar, a fin de renovar por la palabra nuestro constante anhelo de permanecer, *corde, voce et opere*, en plena identidad con los designios del Vicario de Jesucristo.

En los acuerdos de la Conferencia de Madrid creemos haber interpretado fielmente cuantas directivas nos han sido comunicadas por los órganos autorizados de Vuestra Santidad, y confiamos en que estas explicaciones han de evidenciar todavía nuestra indeclinable voluntad de concordar con ellas. Nos informamos asimismo de la «Gravis theologi sententia de interpretatione danda verbis illis S(ummi) P(ontificis) ad catholicos hispanos, merced al concurso de todas (las) buenas energías y por las vías

justas y legítimas, cuyo texto llegó a nuestras manos por conducto del Comisario General de la Compañía en España. No habiendo tenido confirmación de ella *forma solita*, no le dimos estado oficial en la Conferencia: no dudamos, empero, que su tónica ha estado siempre presente en nuestras actuaciones y deliberaciones tal como aconseja la prudencia y permite la realidad, en evitación de mayores males y consecución de los posibles bienes, según ha sido el sagrado interés de Vuestra Santidad en su paternal afección por la Iglesia de España.

Nuevamente expresan a Vuestra Santidad su adhesión, gratitud y fidelidad e imploran la Paternal Bendición de Vuestra Santidad, cuya sagrada mano besan, sus fieles hijos y fieles Servidores.

(firmado)

- † F. Card. Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona.
- † E. Card. Hundain, Arzobispo de Sevilla.
- † Ramón, Patriarca de las Indias.
- † Remigio, Arzobispo de Valladolid.
- † Prudencio, Arzobispo de Valencia.
- † Rigoberto, Arzobispo de Zaragoza.
- † Fr. Zacarias, Arzobispo de Santiago.
- † Manuel, Arzobispo de Burgos.
- † Manuel, Obispo de Jaén.
- † Eustaquio, Obispo de Sigüenza.

P. S. Si Vuestra Santidad desea ampliación respecto del estado social, religioso y político de España y de la actuación de los Metropolitanos, estamos gustosamente dispuestos a dar cuantas Vuestra Santidad estime convenientes, por escrito o verbalmente.

18. - "Comentarios a la Constitución"

"Documental", núms. 1-3 de 1932, Recogido en *Exigència i Estat durant la segona República espanyola, 1931/1936*, págs. 484-505.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA

Como Presidente de las Cortes Constituyentes, y en su nombre, declaro solemnemente que estas, en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente:

ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCION

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1.º España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia.

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones.

La bandera de la República española es roja, amarilla y morada.

Art. 2.º Todos los españoles son iguales ante la ley.

Art. 3.º El Estado español no tiene religión oficial.

Art. 4.º El castellano es el idioma oficial de la República.

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconocen a las lenguas de las provincias o regiones.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional.

Art. 5.º La capitalidad de la República se fija en Madrid.

Art. 6.º España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Art. 7.º El Estado español acata las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.

Votos. — En la «Declaración colectiva del Episcopado», se hace el juramento de esta «Constitución de la República Española». Al publicar su texto en el *Buena Nueva* permitiendo, por nuestra cuenta, sobrepasar aquello que no está conforme con la doctrina o leyes católicas. Para contrarrestar esta pugna entre el catolicismo y varios de los artículos constitucionales podría admitirse muy cabalmente documentación. Tan solo por vía de ejemplo ponemos a continuación algunas citas señalando el artículo constitucional a que se refieren.

Al artículo 1.º: «El sistema enseña la Iglesia que el mundo político (la autoridad) procede de Dios. León XIII, *Quinquagesima annus*, 29-1881. El poder público, por sí mismo o eventualmente considerado, no proviene sino de Dios, porque solo Dios es el propio, verdadero y supremo Señor de las cosas. Id. *Immortale Dei*, 1-11-1885.

Al art. 1.º: «Constituida la sociedad política, manifiesta es que ha de cumplir, por medio del culto público, las muchas y relevantes obligaciones que le unen con Dios. Id. id. id.

TÍTULO PRIMERO

Organización nacional

Art. 8.º El Estado español, dentro de los límites inalterables de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía.

Los territorios de soberanía del norte de África se organizarán en régimen autónomo en relación directa con el Poder central.

Art. 9.º Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Consejo abierto.

Los Alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento.

Art. 10. Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines político-administrativos.

En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que acordamente las forman, salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes.

En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y facultades administrativas iguales a las que la ley atribuya al de las provincias.

Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico.

Art. 11. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el art. 12.

En ese Estatuto podrán recabar para sí, en su totalidad o parcialmente, las atribuciones que se determinan en los artículos 15, 16 y 18 de esta Constitución, sin perjuicio, en el segundo caso, de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Código fundamental.

La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí. Una vez aprobado el Estatuto, será la ley básica de la organización político-administrativa de la región autónoma, y el Estado español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

Art. 12. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones:

a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región.

b) Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años.

c) Que lo aprueben las Cortes.

Los Estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan, en caso alguno, preceptos contrarios a la Constitución, y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias

no transmisibles al poder regional, sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16.

Art. 13. En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas.

Art. 14. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes:

1.ª Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes constitucionales.

2.ª Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos.

3.ª Representación diplomática y consular y, en general, la del Estado en el exterior, declaración de guerra; Tratados de paz, régimen de Colonias y Protectorado, y de toda clase de relaciones internacionales.

4.ª Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional u extrarregional.

5.ª Pesca marítima.

6.ª Deuda del Estado.

7.ª Ejército, Marina de guerra y Defensa nacional.

8.ª Régimen arancelario, Tratados de Comercio, Aduanas y libre circulación de las mercancías.

9.ª Abanderamiento de buques mercantes, sus derechos y beneficios e iluminación de costas.

10. Régimen de extradición.

11. Jurisdicción del Tribunal Supremo, salvo las atribuciones que se reconozcan a los Poderes regionales.

12. Sistema general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación.

13. Régimen general de comunicaciones, líneas aéreas, correos, telégrafos, cables submarinos y radiocomunicación.

14. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas, cuando las aguas discurren fuera de la región autónoma u el transporte de la energía salga de su término.

15. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales.

16. Policía de fronteras, inmigración, emigración y extranjería.

17. Hacienda general del Estado.

18. Fiscalización de la producción y el comercio de armas.

Art. 15. Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las siguientes materias:

1.ª Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos, personal, real y formal, para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España.

Al art. 14. La Iglesia, establecida por Jesucristo como sociedad perfecta, exige por derecho propio, al cual no puede renunciar, plena libertad e independencia del poder civil. Pio XI. *Quas primas*, 11-12-1925.

Al art. 15, 11.ª Los socialistas impugnaban el derecho de propiedad, sancionado por la ley natural y cometido gran delito, tratan por arruinar y hacer común lo adquirido a título de legítima herencia, con el trabajo, con la soberanía. León XIII. *Quod apostolice*, 28-12-1878. Los socialistas pretenden que es preciso acabar con la propiedad privada y sustituirla con la colectiva. Ese procedimiento perjudica a los obreros, es injusto porque hace violencia a los que legítimamente poseen. Id. *Retum munarum*, (3-5-1891).

La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República, para garantizar su estricto cumplimiento y el de los tratados internacionales que afecten a la materia.

2.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial

3.ª Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos.

4.ª Pesas y medidas.

5.ª Régimen minero y bases mínimas sobre montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional.

6.ª Ferrocarriles, carreteras, canales, teléfonos y puertos de interés general quedando a salvo para el Estado la reversion y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse.

7.ª Bases mínimas de la legislación sanitaria interior.

8.ª Régimen de seguros generales y sociales.

9.ª Legislación de aguas, caza y pesca fluvial

10.ª Régimen de Prensa, Asociaciones, reuniones y espectáculos públicos.

11.ª Derecho de expropiación, salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares.

12.ª Situación de riquezas naturales y empresas económicas, delimitándose por la legislación, la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones.

13.ª Servicios de aviación civil y radiodifusión

Art. 16. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores, *podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecutoria directa, conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes.*

Art. 17. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles.

Art. 18. *Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma, se reputarán propias de la competencia del Estado, pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley.*

Art. 19. El Estado podrá fijar, por medio de una ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas, cuando así lo exija la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República. *Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad.*

Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados que integren las Cortes.

En las materias reguladas por una ley de Bases de la República, las regiones podrán estatuir lo pertinente, por ley o por ordenanza.

Art. 20. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas, excepto aquellas cuya aplicación este atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario, siempre conforme a lo establecido en este Título.

El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes, aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales.

Art. 21. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no este atribuido a la exclusiva competencia de estas en sus respectivos Estatutos.

Art. 22. Cualquiera de las provincias que forme una region autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo menos, dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia.

TÍTULO II

Nacionalidad

Art. 23. Son españoles:

1.º Los nacidos dentro o fuera de España, de padre o madre españoles.
2.º Los nacidos en territorio español de padres extranjeros, siempre que opten por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen.

3.º Los nacidos en España de padres desconocidos.

4.º Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la República, en los términos y condiciones que prescriban las leyes.

La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales.

Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen español que residan en el Extranjero.

Art. 24. La calidad de español se pierde:

1.º Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español, o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anexo ejercicio de autoridad o jurisdicción.

2.º Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero.

A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijara una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen.

En estos mismos países, si sus leyes no lo prohiben aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

TÍTULO III

Derechos y deberes de los españoles

CAPÍTULO PRIMERO

Garantías individuales y políticas

Art. 25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico, la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas.

El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios.

El art. 25. Por diversa institución hay en la Iglesia clérigos distintos de los seglares (canón 107 del C. de D. C.). Entre los clérigos existe jerarquía, y esta jerarquía eclesiástica consta de Obispos, presbíteros y ministros, por razón del Orden, y de Pontificado supremo o Encabezado subordinado, por razón de jurisdicción (c. 108).

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como iguales y sometidas a una ley especial.

fi Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán favorección ni auxilio económico a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.

Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que constituyeron unipersonales, además de los tres votos canónicos, otro especial de carácter u autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes y aplicada a las siguientes Pases:

- 1^o Disolución de los que, por sus actividades, constituyen un peligro para la seguridad del Estado.
 - 2^o Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.
 - 3^o Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
 - 4^o Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la artesanía.
 - 5^o Sancionar a todos las leyes tributarias del país.
 - 6^o Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
- Los fines de las Órdenes religiosas podrán ser mancomunados.

Art. 37. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública.

Los cementerios estarán exclusivamente a la intemperie civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las instituciones públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.

La condición religiosa no es constitutiva circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo la dispuesta en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.

Art. 28. Solo se castigaran los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a las formas legales.

El Art. 29. "Cada uno de los Art. 191. La libre iniciativa económica y la libre competencia tienen derecho natural sobre y independientemente de toda prelación civil de adquirir, ejercer y administrar bienes por sí o por medio de personas con sus límites previstos en el Art. 196. Tiene derecho la familia independiente y autónoma de la propiedad civil de exigir de sus bienes lo necesario para el culto divino y la necesaria sustentación de los hijos y otras necesidades y sus debidas líneas propias de ella y el Art. 194. La libertad civil debe comprender libertad a las órdenes y Congregaciones religiosas de ambos sexos. (Guaymas, 1911-1915)

Al día 22. Proposición condenada, num 13 del Sínodo. En todo cada hombre de abstrar y profesar la religion que, guiado por su razón, le parezca verdadera. Id. num 16. Los hombres pueden salirse con el culto de cualquiera religion. Id. num 22. No contiene en nuestra ciudad otra la religion católica como una del Estado. Id. num 33. Los sacerdotes en algunas puestas católicas, está establecido que los inmigrantes puedan ejercer cualquier culto. Pío IX. 4. 12. 1864.

Art. 29. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención.

Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. La resolución que se dicte será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo.

Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este artículo, y los agentes y funcionarios que las ejecuten, con evidencia de su ilegalidad.

La acción para perseguir estas infracciones será pública, sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género.

Art. 30. *El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delinquentes político-sociales.*

Art. 31. Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlo a no ser en virtud de sentencia ejecutoria.

El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca.

Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español.

El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable. Nadie podrá entrar en el sino en virtud de mandamiento de juez competente. El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia, y, en su defecto, de dos vecinos del mismo pueblo.

Art. 32. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no ser que se dicte auto judicial en contrario.

Art. 33. Toda persona es libre de elegir profesión. Se reconoce la libertad de industria y comercio, salvo las limitaciones que, por motivos económicos y sociales de interés general, impongan las leyes.

Art. 34. *Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura.* En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente.

No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico, sino por sentencia firme.

Art. 35. Todo español podrá dirigir peticiones, individual y colectivamente, a los poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.

Art. 36. Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.

Al art. 34. Hay derecho para propagar lo verdadero y honesto, pero en cuanto a los escritos que corrompen el alma y las costumbres, es justo que la pública autoridad los censure con diligencia. Véase el III en su enciclica *Libertas*, en que continuamente trata de la verdadera y de las falsas libertades, 20-1888). La Iglesia tiene derecho a exigir que los fieles no publiquen escritos que ella antes no haya examinado (c. 1381). Así en el canon siguiente, 1385, misma varias prohibiciones. Proposición condenada, núm. 19 del Sínodo. Es falso que la libertad de cultos, y la plena libertad concedida a todos de manifestar públicamente sus opiniones, conduzca a corromper las costumbres y las almas y a propagar la peste del indiferentismo.

Art. 37. *El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes.*

Las Cortes, a propuesta del Gobierno, fijarán todos los años el contingente militar.

Art. 38. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas.

Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación.

Art. 39. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana, conforme a las leyes del Estado.

Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el Registro público correspondiente, con arreglo a la ley.

Art. 40. Todos los españoles, sin distinción de sexo, son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad, salvo las incompatibilidades que las leyes señalen.

Art. 41. Los nombramientos, excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. Su inmovilidad se garantizará por la Constitución. La separación del servicio, las suspensiones y los traslados solo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley.

No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas, sociales o religiosas.

Si el funcionario público, en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva serán automáticamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes, conforme determine la ley.

Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios.

Art. 42. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29, 31, 34, 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente, en todo el territorio nacional o en parte de él, por decreto del Gobierno, cuando así lo exija la seguridad del Estado, en casos de notoria e inminente gravedad.

Si las Cortes estuviesen reunidas, resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno.

Si estuviesen cerradas, el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. A falta de convocatoria se reunirán automáticamente.

Al art. 37. Los cierran todos se hallan inmutos del servicio militar y de cargos y oficios públicos según a su estado id. 1211. V. Sílabos, números 30 y 32.

Al art. 39. Proposiciones condenadas. Número 19 del Sílabos. El Estado, como a origen y fuente de todo derecho, goza de un derecho sin límites. Número 13. No pertenece exclusivamente a la potestad eclesiástica, por su propio y nativo derecho, dirigir la doctrina de las cosas religiosas. Número 44. La autoridad civil puede mezclarse en aquellas cosas que pertenecen a la religión, a las costumbres y al régimen espiritual. Código de Derecho canónico. Cánones del no. 691, 692, 693. Sílabos, número 41. A la potestad civil o a la que es ejercida por un gobierno civil compete la facultad indirecta negativa de entrometirse en las cosas sagradas, y por lo tanto a aquélla compete, no solamente el derecho que llaman *exequatur*, sino también el derecho que llaman *de apellacion* contra el abuso.

Al art. 41. Proposiciones condenadas en el Sílabos: Número 15. Cada hombre es libre para abrazar y profesar la religión que según la luz de su razón juzgue que es la verdadera. Número 16. Los hombres, en el culto de cualquier religión, pueden buscar el camino de la eterna salud y conseguir la salvación eterna.

mente al noveno día. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías.

Si existieran disueltas, el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62, que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes.

El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso.

Durante la suspensión regirá, para el territorio a que se aplique, la ley de Orden público.

En ningún caso podrá el Gobierno estranar o deportar a los españoles, ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio.

CAPÍTULO II

Familia, economía y cultura

Art. 43. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y *podrá disolverse por mutuo consenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con atención en este caso, de justa causa.*

Los padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución.

Los padres tienen para con los hijos habidos fuera de matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en el.

Tus leyes creíbles regularán la investigación de la paternidad.

No podrá constarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres, en las actas de inscripción ni en filación alguna.

El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia haciendo suya la «Declaración de Ginebra» o tabla de los derechos del niño.

Art. 44. *Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.*

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes.

Con los mismos requisitos, la propiedad podrá ser socializada.

Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija.

Al art. 43, la Enc. Conc. comido de Pío XI (1925) y la de León XIII (Anuncio 1211850) forman un tratado sobre esta importante materia instrumental. Respecto de la indivisibilidad dice Pío XI: Esta insalvable estabilidad aunque no en la misma perfecta medida a cada uno compete a todo matrimonio verdadero. — La que impide, sobre todo, la perfección del matrimonio que estableció Cristo Redentor nuestro, es esa facilidad que existe para el divorcio, y que la venimos cada día mayor. Los defensores del neopaganismo se levantan con acrimonia cada vez mayor, contra la santa indivisibilidad del matrimonio y las leyes que la protegen. V. proposiciones 87, 85, 86, 88 y 73 del Sillabus.

Al art. 44, Sillabus, número 26. La Iglesia no tiene el derecho nativo y legítimo de adquirir y poseer. Número 27. Los Ministros sagrados y el Romano Pontífice han de ser excluidos de toda administración y dominio de los bienes temporales. Código de Derecho Canónico, Cánones 1499, 1502 y siguientes del mismo Título.

El Estado podrá intervenir por ley la explotación y explotación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la nacionalización de la producción y los intereses de la economía nacional.

En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.

Art. 45. *Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye el tesoro cultural de la Nación y está a bajo la salvaguarda del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y de crear las disposiciones legales que estimare oportunas para su defensa.* El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación.

El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.

Art. 46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección de las leyes.

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. Su legislación social regulará los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro forzoso, vejez, invalidez e muerte; el trabajo de los mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas; las condiciones del obrero español en el Extranjero; las instituciones de cooperación; la relación económica y jurídica de los factores que intervengan la producción; la participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores.

Art. 47. La República protegerá al campesino y a este fin legislará, entre otras materias, sobre el patrimonio familiar, inembargable y exento de toda clase de impuestos, crédito agrícola, indemnización por pérdida de las cosechas, cooperativas de producción y consumo, casas de producción, escuelas prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias, obras para riego y vías rurales de comunicación.

La República protegerá en términos equivalentes a los pesqueros.

Art. 48. *El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado y lo prestará mediante instituciones educativas vinculadas por el sistema de la escuela unificada.*

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria.

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. *La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada.*

La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.

— — —
 El art. 45. Constituye un código sobre materia de enseñanza. La escuela tiene origen en el Pío XI (21-12-1929). La educación es obra necesariamente social y no individual. Tres mandatos han en el seno de los cuales nace el hombre: la familia, instituida inmediatamente por Dios para su fin más primo cual es la procreación y educación de la prole; la sociedad civil, para procurar el bien temporal; la cual debe proteger este derecho de la familia y la pío y promover la educación e instrucción; y la Iglesia, sociedad sobrenatural, a quien supereminentemente toca la educación por el doble título de suprema autoridad de magisterio y de maternidad sobrenatural; indelentamente de cualquier potestad terrena. Tanto en el origen como en el ejercicio de su misión educativa, no solo a su objeto propio, sino también respecto a los medios necesarios y convenientes para cumplirlo. — Es contraria a los principios fundamentales de la educación la escuela llamada "señalada" o "clases", de la que está excluida la religión que de hecho tiene a hacerse irreconocible. La existencia a estas escuelas señaladas, seculares o mixtas, crea prohibida a los niños católicos. V. las proposiciones 45 y 47 del Solitario.

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metódica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.

Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.

Art. 49. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado, que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado, la duración de los períodos de escolaridad, el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados.

Art. 50. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República.

El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores.

El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el Extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos.

TÍTULO IV

Las Cortes

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados.

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto.

Art. 53. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitres años, sin distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral.

Los Diputados, una vez elegidos, representan a la Nación. La duración legal del mandato será de cuatro años, contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso. Sesenta días, a lo sumo, después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes, bahrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días, como máximo, después de la elección. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente.

Art. 54. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados, así como su retribución.

Art. 55. Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emiten en el ejercicio de su cargo.

Art. 56. Los Diputados solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente.

Si algun juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado, lo comunicara así al Congreso, exponiendo los fundamentos que considere pertinentes.

Transcurridos sesenta días, a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo del oficio correspondiente, sin tomar acuerdo respecto del mismo, se entenderá denegado el suplicatorio.

Toda detención o procesamiento de un Diputado quedara sin efecto cuando así lo acuerde el Congreso, si está reunido, o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta.

Tanto el Congreso como la Diputación Permanente, según los casos antes mencionados, podran acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial.

Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones.

Art. 57. El Congreso de los Diputados tendra facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de regimen interior.

Art. 58. Las Cortes se reuniran sin necesidad de convocatoria el primer día habil de los meses de febrero y octubre de cada año, y funcionaran, por lo menos, durante tres meses en el primer periodo y dos en el segundo.

Art. 59. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado, desde el momento en que el Pleno, dentro no hubiere cumplido, dentro de plazo, la obligación de convocar las nuevas elecciones.

Art. 60. El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes.

Art. 61. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que este legisle por decreto, acordado en Consejo de Ministros, sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo.

Estas autorizaciones no podrán tener carácter general, y los decretos dictados en virtud de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta.

El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados, para enjuiciar sobre su adaptación a las bases establecidas por el.

En ningún caso podrá autorizarse, en esta forma, aumento alguno de gastos.

Art. 62. El Congreso designara de su seno una Diputación Permanente de Cortes, compuesta, como maximum, de 21 representantes de las distintas fracciones políticas, en proporción a su fuerza numérica.

Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá:

1.º De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el art. 42.

2.º De los casos a que se refiere el artículo 80 de esta Constitución relativos a los decretos-leyes.

3.º De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados.

4.º De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diera atribución.

Art. 63. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso, aunque no sean Diputados.

No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos.

Art. 64. El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros.

Todo voto de censura deberá ser propuesto en forma motivada y por escrito, con las firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo.

Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días de su presentación.

No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro, cuando el voto de censura no fuese aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara.

Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura.

Art. 65. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional, se considerarán parte constitutiva de la legislación española, que habrá de acomodarse a lo que en aquellos se disponga.

Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado, el Gobierno presentará en plazo breve, al Congreso de los Diputados, los proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos.

No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios, si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido.

La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes.

Art. 66. El pueblo podrá atraer a su decisión, mediante «referendum», las leyes votadas por las Cortes. Para ello bastará que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral.

No serán objeto de este recurso la Constitución, las leyes complementarias de la misma, las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones, los Estatutos regionales ni las leyes tributarias.

El pueblo podrá asimismo, ejerciendo el derecho de iniciativa, presentar a las Cortes una proposición de ley, siempre que lo pida por lo menos el 15 por 100 de los electores.

Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del «referendum» y de la iniciativa popular.

TÍTULO V

Presidencia de la República

Art. 67. El presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la nación.

La ley determinará su dotación y sus honores, que no podrán ser alterados durante el periodo de su magistratura.

Art. 68. El presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de diputados.

Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, conforme al procedimiento que determine la ley. Al Tribunal de Garantías constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios.

Art. 69. Solo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

Art. 70. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:

a) Los militares en activo o en la reserva ni los retirados que no estén en dicha situación cuando menos, en dicha situación.

b) Los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos.

c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país, sea cual fuere el grado de parentesco que los una con el jefe de las mismas.

Art. 71. El mandato del presidente de la República durará seis años.

El presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su anterior mandato.

Art. 72. El Presidente de la República prometerá ante las Cortes, solemnemente reunidas, fidelidad a la República y a la Constitución.

Prestada esta promesa, se considerará iniciado el nuevo periodo presidencial.

Art. 73. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial.

Art. 74. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República, le sustituirá en sus funciones el de las Cortes, quien será sustituido en las suyas por el Vicepresidente del Consejo. Del mismo modo, el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República, si esta queda vacante, en tal caso, será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días, conforme a lo establecido en el artículo 66, y se celebrará dentro de los treinta siguientes a la convocatoria.

A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República, las Cortes, aun estando disueltas, conservan sus poderes.

Art. 75. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno, y, a propuesta de este, a los ministros. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negasen, de modo expreso, su confianza.

Art. 76. Corresponde también al Presidente de la República:

a) Declarar la guerra, conforme a los requisitos del artículo siguiente, y firmar la paz.

b) Confiar los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales, de acuerdo con las leyes y los reglamentos.

c) Autorizar con su firma los decretos, refrendados por el ministro correspondiente, previo acuerdo del Gobierno, pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes, si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes.

d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación, dando inmediata cuenta a las Cortes.

e) Negociar, firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional.

Los Tratados de carácter político, los de comercio, los que supongan gravamen para la Hacienda pública, o individualmente para los ciudadanos españoles, y en general todos aquellos que exijan para su ejecución medidas

de orden legislativo, solo obligarán a la Nación si han sido aprobados por las Cortes.

Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las Cortes en el plazo de un año, y, en caso de circunstancias excepcionales, de dieciocho meses, a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados. Una vez aprobados por el Parlamento, el Presidente de la República subcribirá la ratificación, que será comunicada, para su registro, a la Sociedad de las Naciones.

Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España, también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones, con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad, a los efectos que en él se previenen.

Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no obligarán a la Nación.

Art. 77. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones, y solo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter belico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que España fuere parte, registrados en la Sociedad de las Naciones.

Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de Conciliación y arbitraje, se aplicaran éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales.

Cumplidos los anteriores requisitos, el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra.

Art. 78. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad, y mediante previa autorización de las Cortes, consignada en una ley especial, votada por mayoría absoluta.

Art. 79. El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno, expedirá los decretos, reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes.

Art. 80. Cuando no se halle reunido el Congreso, el Presidente, a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación Permanente, podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes, en los casos excepcionales que requieran urgente decisión, o cuando lo demande la defensa de la República.

Los decretos así dictados tendrán solo carácter provisional, y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia.

Art. 81. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno.

Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura solo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo, siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el artículo 58.

El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario, sujetándose a las siguientes condiciones:

a) Por decreto motivado.

b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días.

En el caso de segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará anejo la destitución del Presidente.

Art. 82. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato. La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que compongan el Congreso, y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones.

En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la elección de Presidente. Los compromisarios, reunidos con las Cortes, decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de estas.

Si la Asamblea votare contra la destitución, quedará disuelto el Congreso. En caso contrario, esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente.

Art. 83. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso, dentro del plazo de quince días, contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada.

Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso, el Presidente procederá a su inmediata promulgación.

Antes de promulgar las leyes no declaradas urgentes, el Presidente podrá pedir al Congreso, en mensaje razonado, que las someta a nueva deliberación. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votos, el Presidente quedará obligado a promulgarlas.

Art. 84. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del presidente que no estén referendados por un ministro.

La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal.

Los ministros que refrenden actos o mandatos del presidente de la República, asumen la plena responsabilidad política y civil, y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse.

Art. 85. El presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales.

El Congreso, por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros, decidirá si procede acusar al presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Mantenido la acusación por el Congreso, el Tribunal resolverá si la admite o no. En caso afirmativo, el presidente quedará, desde luego, destituido, procediéndose a nueva elección, y la causa seguirá sus trámites.

Si la acusación no fuese admitida, el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva convocatoria.

Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la República.

TÍTULO VI

Gobierno

Art. 86. El presidente del Consejo y los ministros constituyen el Gobierno.

Art. 87. El presidente del Consejo de ministros dirige y representa la política general del Gobierno. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art. 70, para el presidente de la República.

A los ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes departamentos ministeriales.

Art. 88. El presidente de la República, a propuesta del presidente del Consejo, podrá nombrar uno o más ministros sin cartera.

Art. 89. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes. Mientras ejerzan sus funciones no podrán desempeñar profesión alguna ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna Empresa ni Asociación privada.

Art. 90. Corresponde al Consejo de ministros, principalmente, elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento, dictar decretos, ejercer la potestad reglamentaria y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.

Art. 91. Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente, de la política del Gobierno, e individualmente, de su propia gestión ministerial.

Art. 92. El presidente del Consejo y los ministros son también, individualmente, responsables, en el orden civil y en el criminal, por las infracciones de la Constitución y de las leyes.

En caso de delito, el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías constitucionales, en la forma que la ley determine.

Art. 93. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración del Gobierno y de las Cortes.

Entre estos organismos figurará un Cuerpo Consultivo Supremo de la República en asuntos de gobierno y administración, cuya composición, atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley.

TÍTULO VII

Justicia

Art. 94. La Justicia se administra en nombre del Estado.

La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la Justicia.

Los jueces son independientes en su función. Sólo están sometidos a la ley.

Art. 95. *La administración de Justicia comprenderá todas las jurisdicciones existentes, que serán reguladas por las leyes.*

La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados.

Al art. 95. El Código de Derecho canónico, en su Canon 1.553, dice que la Iglesia, por derecho propio y exclusivo, conoce: 1.º De las causas que se refieren a las cosas espirituales y de las almas y a las espirituales. 2.º De la violación de las leyes eclesásticas y de todos aquellas a las cuales se unida la ración de pecado, todo cuanto se refiera a la definición de la culpa e imputación de las penas eclesásticas. 3.º De todas las causas, ya sean comunes o ya sean criminales, que se refieren a las personas que gozan del privilegio del fuero eclesástico, según la norma de los Canones 120, 414 y 460. En las causas en las cuales no mismo la Iglesia que la justicia civil sean igualmente competentes y que se llaman de fuero mixto, hay lugar a prevención.

El Canon 2314 castiga con excomunión, entre venientes, reservada de un modo especial a la Sede apostólica, 1.º A los que dan leyes, mandatos o decretos contra la libertad o los derechos de la Iglesia. 2.º A los que impiden directa o indirectamente el ejercicio de la jurisdicción eclesástica, ya sea del fuero interno, ya sea del fuero externo, recurriendo, para conseguir esto, a cualquier potestad laical.

El Canon 1.341 castiga también con severísimas penas a los que, faltando a lo que prescribe el Canon 120, llevan ante los tribunales laicos a las altas dignidades y demás personas eclesásticas.

No podrá establecerse fuera alguna por razón de las personas ni de los lugares. Se exceptúa el caso de estado de guerra, con arreglo a la ley de Orden público.

Quedan abolidos todos los Tribunales de honor tanto civiles como militares.

Art. 96. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el jefe del Estado, a propuesta de una asamblea constituida en la forma que determine la ley.

El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español, mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho.

Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales.

El ejercicio de su magistratura durará diez años.

Art. 97. El presidente del Tribunal Supremo tendrá, además de sus facultades propias, las siguientes:

a) Preparar y proponer al ministro y a la Comisión parlamentaria de Justicia, leyes de reforma judicial y de los Códigos de procedimiento.

b) Proponer al Ministro, de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley designe, entre elementos que no ejerzan la abogacía, los ascensos y traslados de jueces, magistrados y funcionarios fiscales.

El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión parlamentaria de Justicia, sin que ello implique asenso en la Cámara.

Art. 98. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados, separados ni suspendidos en sus funciones, ni trasladados de sus puestos, sino con sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales.

Art. 99. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces, magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, será exigible ante el Tribunal Supremo, con intervención de un Jurado especial, cuya designación, capacidad e independencia regulará la ley; se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.

La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías constitucionales.

Art. 100. Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución, suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías constitucionales.

Art. 101. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder.

Art. 102. Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los indultos, a propuesta del sentenciador, del fiscal, de la Junta de Prisiones o a petición de parte.

En los delitos de extrema gravedad podrá indultar el Presidente de la

República, previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable.

Art. 103. El pueblo participará en la administración de Justicia mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial.

Art. 104. El ministerio fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.

Constituirá un solo Cuerpo, y tendrá las mismas garantías de independencia que la administración de Justicia.

Art. 105. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales.

Art. 106. Todo espácul tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos, conforme determinan las leyes.

El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones.

TITULO VIII

Hacienda pública

Art. 107. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno; su aprobación, a las Cortes. El Gobierno presentará a éstas, en la primera quincena de Octubre de cada año, el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente.

La vigencia del Presupuesto será de un año.

Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente, se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto, sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro.

Art. 108. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capítulo del proyecto de Presupuesto, a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso.

Art. 109. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto, y en él serán incluidos, tanto en ingresos como en gastos, los de carácter ordinario.

En caso de necesidad perentoria, a juicio de la mayoría absoluta del Congreso, podrá autorizarse un Presupuesto extraordinario.

Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y, censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República, éste, sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos, comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que, a su juicio, se hubiere incurrido.

Art. 110. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes, y no requerirá, para su vigencia, la promulgación del Jefe del Estado.

Art. 111. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto.

Art. 112. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo, habrá de contener las condiciones de este, incluso el tipo nominal de interés, y, en su caso, de la amortización de la Deuda.

Las autorizaciones al Gobierno en este respecto se limitarán, cuando así lo estimen oportuno las Cortes, a las condiciones y al tipo de negociación.

Art. 113. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en el consignado, salvo caso de guerra. En consecuencia, no podrán existir los créditos llamados ampliables.

Art. 114. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio, que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Por excepción, cuando las Cortes no estuvieren reunidas, podrá el Gobierno conceder, bajo su responsabilidad, créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos:

- a) Guerra o evitación de la misma.
- b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas.
- c) Calamidades públicas.
- d) Compromisos internacionales.

Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos.

Art. 115. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla.

La exacción de contribuciones, impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de crédito se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor, pero no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto.

No obstante, se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas, ordenadas en las leyes.

Art. 116. La ley de Presupuestos, cuando se considere necesaria, contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera.

Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo.

Art. 117. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.

Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses.

Art. 118. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto, y no podrán ser objeto de discusión mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. De idénticas garantías disfrutará, en general, toda operación que implique, directa o indirectamente, responsabilidad económica del Tesoro, siempre que se dé el mismo supuesto.

Art. 119. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización, se ajustará a las siguientes normas:

Primera. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión.

Segunda. Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Ni los recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado.

Tercera. Financie la Deuda o deudas cuya amortización se le confíe.

El presupuesto anual de la Caja necesitará, para ser ejecutivo, la aprobación del ministro de Hacienda. Las cuentas se someterán al Tribunal de Cuentas de la República. Del resultado de esta cuenta conocerán las Cortes.

Art. 120. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.

Una ley especial regulará su organización, competencia y funciones.

Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales.

TÍTULO IX

Garantías y reforma de la Constitución

Art. 121. Se establece, con jurisdicción en todo el territorio de la República, un Tribunal de Garantías constitucionales, que tendrá competencia para conocer de:

- a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes.
- b) El recurso de amparo de garantías individuales cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades.
- c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí.
- d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que, juntamente con las Cortes, eligen al Presidente de la República.
- e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de los Ministros.
- f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República.

Art. 122. Compondrán este Tribunal:

Un presidente, designado por el Parlamento, sea o no Diputado.

El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el artículo 93.

El presidente del Tribunal de Cuentas de la República.

Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes.

Un representante por cada una de las Regiones españolas, elegido en la forma que determine la ley.

Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la República.

Cuatro profesores de la Facultad de Derecho, designados por el mismo procedimiento entre todas las de España.

Art. 123. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías constitucionales:

Primero. El Ministerio Fiscal.

Segundo. Los jueces y tribunales en el caso del art. 100.

Tercero. El Gobierno de la República.

Cuarto. Las Regiones españolas.

Quinto. Toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada.

Art. 124. Una ley orgánica especial, votada por estas Cortes, establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el artículo 121.

Art. 125. La Constitución podrá ser reformada:

a) A propuesta del Gobierno.

b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento.

En cualquiera de estos casos, la propuesta señalará concretamente el artículo o los artículos que hayan de suprimirse, reformarse o adicionarse; según los trámites de una ley y requerirá el voto, además con la reforma, de las dos terceras partes de los diputados en el ejercicio del cargo, durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la mayoría absoluta en lo sucesivo.

Acordada en estos términos la necesidad de la reforma, quedará automáticamente disuelto el Congreso, y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días.

La Cámara así elegida, en funciones de Asamblea Constituyente, decidirá sobre la reforma propuesta, y actuará luego como Cortes ordinarias.

Disposiciones transitorias

Primera. Las actuales Cortes Constituyentes elegirán, en votación secreta, el primer Presidente de la República. Para su proclamación deberá obtener la mayoría absoluta de votos de los Diputados en el ejercicio del cargo.

Si ninguno de los candidatos obtuviese la mayoría absoluta de votos, se procederá a nueva votación y será proclamado el que reúna mayor número de sufragios.

Segunda. La ley de 26 de Agosto próximo pasado, en la que se determina la competencia de la Comisión de responsabilidades, tendrá carácter constitucional transitorio hasta que concluya la misión que le fue encomendada, y la de 21 de Octubre conservará su vigencia asimismo constitucional mientras subsistan las actuales Cortes Constituyentes, si antes no la derogan estas expresamente.

Por tanto,

En representación de las Cortes Constituyentes, mando a todos los españoles, autoridades y particulares, que guarden y hagan guardar la presente Constitución, como norma fundamental de la República.

Palacio de las Cortes Constituyentes, a nueve de Diciembre de mil novecientos treinta y uno. — *El Presidente, JULIÁN BASTERRA.*

III CAPÍTULO III

LA CUESTIÓN DE LA ENSEÑANZA

1.- "Un desahogo del sectarismo."

"*El Debate*", 10 de mayo de 1931.

2.- Circular de la Dirección General de
Enseñanza.

13 de mayo de 1931, *Gaceta de Madrid*, núm. 142, págs. 874-875, 22 de mayo de 1931.

3.- "Nuestra protesta"

"*El Debate*", 23 de mayo de 1931.

4.- "Anuncios de Escuela Única"

"*El Debate*", 22 de mayo de 1931.

5.- "La verdadera libertad de conciencia."

"*El Debate*", 29 de mayo de 1931.

6.- "Circular número 32. A nuestro amado clero."

10 de mayo de 1931, *BOE de Corja*, año 66, 13 de mayo de 1931, núm. 10, págs. 145-149.

7.- "La enseñanza religiosa y la libertad de cultos."

13 de junio de 1931, *BOE de León*, 15 de junio de 1931, núm. 10, págs. 247-269.

- 8.- "Instrucción pastoral acerca de la educación cristiana de la niñez y de la juventud: derechos y deberes de los padres."

12 de septiembre de 1931, *BOE de Tur*, año 72, 20 de septiembre de 1931, núm. 16, págs. 371-392.

- 9.- "Enseñanzas dolorosas para los padres católicos."

S.f. *BOE de Zaragoza*, año 70, 16 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 412-415.

- 10.- "Cuestiones de actualidad.- Omnis qui zelum habet... exeat (1 March. 11-27)" y "Cuestiones de actualidad (continuación).- Siembra por la mañana... y por la tarde"

S.f. *BOE de Zaragoza*, año 70, 16 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 414-419 y *BOE de Zaragoza*, año 70, 1 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 421-425, (conclusión)

- 11.- "¿De quién son los niños?"

S.f. *BOE de Palencia*, año 81, 1 de octubre de 1931, núm. 21, págs. 640-641.

- 12.- "Circular núm 108. Sobre la urgencia de la instrucción catequística."

16 de noviembre de 1931, *BOE de Valencia*, 1 de diciembre de 1931, núm. 2136, págs. 381-384.

- 13.- "La Confederación de Estudiantes Católicos cumple el 13 aniversario de su fundación."

"*El Debate*", 5 de marzo de 1933.

- 14.- "Circular dando ordenaciones y haciendo recomendaciones al empezar el año."

14 de enero de 1932, *BDE de Tuy*, año 73, 18 de enero de 1932, núm. 1, págs. 3-17.

- 15.- "Jesucristo en la escuela. Circular."

25 de enero de 1932, *BDE de Oviedo*, año 68, 1 de febrero de 1932, núm. 3, págs. 39-42.

- 16.- "Los problemas de la enseñanza. Los padres de familia contra la circular que los excluye"

"*El Debate*", 18 de diciembre de 1932.

- 17.- "El duro ataque a la enseñanza privada."

"*El Debate*", 31 de diciembre de 1932.

- 18.- "¡Marias hay que hacer locuras!"

S.f. *BDE de Málaga*, año 65, 15 de julio de 1932, núm. 7, págs. 181-184.

- 19.- "Auto reformando el elenco de pecados reservados en esta Diócesis."

9 de diciembre de 1932, *BDE de Mondoñedo*, año 75, 20 de diciembre de 1932, núm. 24, págs. 221-222.

- 20.- "Crónica diocesana."

S.f. *BDE de Tuy*, año 73, 15 de abril de 1932, núm. 7, págs. 129-131.

- 21.- "Circular a los Directores de Colegios y Escuelas Católicas de la Diócesis.

15 de enero de 1933, *BOE de Santiago de Compostela*, año 72, 15 de enero de 1933, núm. 2688, págs. 6-10.

- 22.- "Obra Diocesana de las Escuelas Católicas. Advertencias y Mandamientos importantes sobre Escuelas Católicas."

20 de febrero de 1933, *BOE de Vitoria*, año 69, 1 de marzo de 1933, núm. 5, págs. 99.

- 23.- "El espíritu republicano, vigoroso propulsor de la instrucción pública."

"El Sol", 14 de abril de 1933.

- 24.- Nunciatura Apostólica de España. Carta Circular transmitiendo la contestación de la S. Congregación del Concilio sobre los datos recibidos de las catequesis parroquiales e insistiendo en la necesidad de la Cofradía de la Doctrina Cristiana en todas las parroquias.

13 de julio de 1933, *Documental*, núm. 19, 1933, págs. 154-155.

- 25.- "Carta Pastoral: El rumbo de la escuela pública y nuestros deberes."

29 de octubre de 1933, *BOE de Palencia*, año 83, 1 de noviembre de 1933, núm. 21, págs. 585-619.

- 26.- "Centro de cultura superior femenina."

S.f., *BOE de Gerona*, año 77, 28 de septiembre de 1933, núm. 9, págs. 341-346.

- 26.1.-"Centro de cultura superior femenina."

S.f., *BOE de Tarazona y Tudela*, año 71, 1 de octubre de 1933, núm. 724, págs. 692-693.

1.- "Un desahogo del sectarismo".

"El Debate", 10 de mayo de 1931.

El Gobierno ha creído inaplazable modificar por decreto el "statu quo" sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas. Cuando hace pocos días el ministro de Instrucción se apoyaba en la ley de 1857 para establecer el arcaico régimen de exámenes en los Institutos, nos dió derecho a pensar que en el ánimo del Gobierno no estaría acometer reformas de enseñanza de la trascendencia de esta última. No desconoce el Gobierno que "corresponderá a las Cortes Constituyentes resolver sobre... las orientaciones de la enseñanza"; tampoco puede ignorar que el artículo segundo del Concordato celebrado con la Santa Sede establece que "la instrucción en las... escuelas públicas y privadas de cualquier clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma Religión católica". ¿Con qué derecho, ni a qué medida de urgencia puede obedecer ese decreto modificativo de las vigentes leyes escolares? Es cosa razonable pensar que estamos en vísperas de un nuevo Concordato. Entonces sería la ocasión de tratar ese punto con la Santa Sede, y de acuerdo con la autoridad religiosa, introducir en el régimen escolar las modificaciones pertinentes en la enseñanza del catecismo. Pero no la ha creído así el Gobierno. Era muy urgente, a su parecer, situar a España en el plano moral y civil de las democracias de Europa y América, en punto a libertad de conciencia. Por eso se ha lanzado a legislar por decreto en esta delicada cuestión de enseñanza; en esta enseñanza española, donde tantos decretos dictatoriales se han dado contra los derechos constitucionales de los ciudadanos. Una vez más se ha cumplido la frase del fundador de la Instrucción libre, de que "la enseñanza nacional sufre la dictadura ininteligente del Estado".

Deja entender falazmente el decreto que comentemos, que la legislación española constituía una especie de ominosa excepción, respecto de lo que en el mundo civilizado pasa en esta materia. Nada de esto es exacto. En primer lugar, existía ya en España una disposición legal, por la cual quedaban exceptuados de asistir a las clases de Religión los niños cuyos padres o tutores así lo deseaban. Entonces ¿qué modificación de importancia trae el nuevo decreto? La modificación consiste en que hasta ahora se requería la

manifestación expresa de los padres para eximir a los niños de la enseñanza religiosa, y de aquí en adelante sucederá al revés, quedarán eximidos los niños cuyos padres no hagan constar su voluntad expresa de que asistan a las clases de Religión. Con estas ligeras alteraciones, ya España queda a la misma altura de las naciones cultas. ¡Qué osadía en abusar de la supuesta ignorancia del pueblo! La Constitución alemana en su artículo 149, establece que "la Religión es asignatura obligatoria del plan escolar, salvo en las escuelas laicas".

La Constitución de Polonia, en su artículo 120, afirma lo mismo: "En todo establecimiento de instrucción, cuyo programa atañe a la formación de jóvenes que no pasen de diez y ocho años, y que en todo o en parte es sostenida por el Estado o por las municipalidades autónomas, la enseñanza de la Religión es obligatoria para todos los alumnos".

La Constitución de Lituania, en el artículo 81, mantiene el mismo principio: "La instrucción religiosa en las escuelas es obligatoria, a excepción de las escuelas creadas para los niños cuyos padres no pertenecen a ninguna organización confesional".

Se ve, pues, que el término de "enseñanza obligatoria de la Religión" no es para asustar a las gentes, pues se ha consagrado en textos constitucionales modernos, en Estados republicanos, en naciones de alta cultura. El ejemplo de Inglaterra, donde una escuela sin enseñanza religiosa es incomprensible, abona la misma tesis. Y por citar alguna Constitución de las democracias americanas, la de Colombia, en su artículo 41 dice: "La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la Religión católica."

No hay motivo, pues, para ese escándalo de la conciencia laica de algunos ministros, ni para esas prisas en ponernos a nivel de algunas democracias, cuando estábamos honrosamente a la altura de algunas otras.

El punto de la excepción del maestro es cosa de menos importancia. La intervención de los sacerdotes en la escuela no dejará de ser provechosa. Sólo habrá que prevenir una vieja maniobra del sectarismo, ya ensayada, sin éxito en algunos países, de sacar la clase de Religión fuera del horario escolar, de modo que los alumnos tengan necesidad de acudir a la escuela una hora antes, o de salir una hora después, si quieren aprender dicha asignatura. A este recurso hay que oponerse seriamente para evitar que la enseñanza de la Religión constituya una especie de recargo o castigo, que ahuyente a los alumnos de su estudio.

Total, un decreto inútil, pretenciosamente laico, "para la galería" y que a pesar de sus efímeros efectos prácticos, restará al Gobierno confianza y simpatía donde más falta le hacen.

**2.- Circular de la Dirección General de Enseñanza.
13 de mayo de 1931.**

Gaceta de Madrid, núm. 142, 22 de mayo de 1931, págs. 874-875.

El Decreto del día 6 de los corrientes proclama el respeto más absoluto a la conciencia del niño y del Maestro en orden a la instrucción religiosa en las Escuelas. Esa misma libertad en que quedan los alumnos y los Maestros ha dado lugar a interpretaciones y a que lleguen hasta esta Dirección general reiteradas consultas acerca del particular.

Para orientar y facilitar la interpretación y aplicación del Decreto en lo que se refiere a la enseñanza primaria,

Esta Dirección general acuerda dictar las normas siguientes:

En virtud de lo que se determina en el artículo 12 del mencionado Decreto, desaparecerá del programa de las Escuelas nacionales la enseñanza religiosa con el carácter de obligatoria que hasta ahora ha tenido.

Los Maestros harán saber a los padres, por el medio que consideren más eficaz, el derecho que se les reconoce a solicitar para sus hijos la instrucción religiosa. Estas peticiones se harán por escrito al Maestro, quien las conservará para justificar en todo momento su actuación en este aspecto de la labor escolar.

En lo sucesivo, los Maestros requerirán a los padres a hacer la declaración oportuna en el momento de la inscripción en matrícula. Sólo los padres, tutores o familiares más próximos, a falta de aquéllos, tienen derecho a hacer esta declaración.

Los alumnos de la Escuela Superior del Magisterio y de las Normales quedan relevados de la obligación de asistir a clase y de sufrir examen de esta asignatura para obtener el título de Maestro correspondiente, excepto aquellos que manifiesten a la Dirección de la Escuela el deseo de cursar y dar validez a dichos estudios.

Tan pronto como se conozca el deseo de los padres y existan alumnos que quieran recibir la instrucción religiosa, resolverá el Maestro si ha de ser él quien dé aquella enseñanza. En caso negativo, solicitará por escrito, del señor Cura párroco, le proponga se encargue de ella algún Sacerdote. Esta resolución, así como el acuerdo sobre días y horas en que habrá de tener la clase de Religión, será comunicada por el Maestro al Inspector de la zona.

Para que no se interrumpa la estancia de los alumnos en la Escuela, intercalando en el horario escolar el tiempo consagrado a la Religión, deberá tomarse para ella el tiempo destinado a la primera o la última lección de la mañana o de la tarde, en los días acostumbrados. Los niños que no hayan de recibir esta enseñanza, podrán retrasar o adelantar la entrada o la salida de la Escuela en esos días, si la explicación ha de tener lugar en la sala de clase y si el edificio-escuela no dispone de otras aulas donde el grupo de niños que no hayan de oír la puedan

realizar otros trabajos, especialmente prácticos, de interés no fundamental a la cultura primaria.

El espíritu del mencionado Decreto releva a los Maestros de toda obligación de realizar prácticas religiosas con sus alumnos y, por consiguiente, de concurrir con ellos a actos o ceremonias de este carácter.

No hay inconveniente en que los símbolos de la Religión cristiana sigan presidiendo las tareas escolares, en aquellos casos en que el Maestro y la totalidad de los padres se hallen conformes en que continúe dándose la enseñanza religiosa en la forma actual; pero, en caso contrario, aquellos símbolos podrán exhibirse en los locales de clase, mas por respeto a la misma libertad religiosa que el Gobierno ha declarado, dejarán de presidir la vida escolar. Desde luego queda prescrito, por antihigiénica e incluso antirreligiosa la práctica de decorar las paredes de clase con doseles, cromos e imágenes que no sean reproducción estimada de preciosas obras de arte.

La supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe significar abandono en la dirección moral de los escolares; por el contrario, al perder esta enseñanza su orientación dogmática y catequística, el Maestro se esforzará ahora más que nunca, en aprovechar cuantas oportunidades le ofrezcan sus lecciones de otras materias, el diario hacer de la escuela y los altos ejemplos de la vida de los pueblos, para inspirar en los niños un elevado ideal de conducta.

Los señores Inspectores de Primera Enseñanza cuidarán, con el mayor celo, de que estas normas lleguen a conocimiento del Magisterio; de que sean cumplimentadas en forma que no puedan herir el sentimiento religioso de nadie y de que los Maestros, llegado el caso, sean defendidos en esta manifestación de libertad, tan esencial al patrimonio de la conciencia, resolviendo cuantas dudas y reclamaciones puedan producirse en la aplicación de estas instrucciones.

Madrid, 13 de Mayo de 1931.- El Director general, Rodolfo Llopis.

3. - "Nuestra protesta".

"El Debate", 23 de mayo de 1931

La circular del ministerio de Instrucción pública sobre la supresión del Crucifijo en las escuelas inicia en España una política de laicismo, llamada a perturbar hondamente toda la vida nacional.

A los católicos nos corresponde, ineludiblemente, el deber de protestar ante el Gobierno y llamar su atención sobre los tristes estragos que esa política va a causar a sus mismos intereses.

La conciencia católica descansaba en la seguridad de que no se legislaría en materia religiosa sino por las Cortes... Eran muchísimos los españoles dispuestos a prestar su asistencia moral a la República, confiados en el respeto de este Gobierno provisional a los sagrados intereses de la Religión. Serían las Cortes, en todo caso, con la suprema autoridad de la representación nacional, las que modificarían el "statu quo" del régimen religioso-escolar. Todo menos esto que estamos viendo: que con una simple circular se ataquen esos problemas y se los resuelva a gusto y placer de un Director general.

No puede ser esto obra de un Gobierno consciente de los graves problemas que tiene delante, sino obra de algún teorizante impulsivo, inhábil para captar las enormes responsabilidades que contrae quien en estos momentos resta al Poder Público un aliento de simpatía o de apoyo en la opinión española.

Pero no es a nosotros, en primer término, sino al Gobierno, a quien toca considerar este aspecto de su actuación. A nosotros nos toca consignar nuestra más enérgica protesta. Hay cosas que están para nosotros por encima de todo género de miras y de consideraciones. Demasiado consta al Gobierno nuestro buen deseo de reconstrucción jurídica del Estado español, en leal colaboración con el nuevo régimen. Ahora que si el Gobierno, o quienquiera que abuse de su posición en el Gobierno, empieza por desatar una ofensiva contra los sentimientos de los católicos, no nos queda más remedio que llamar a la defensa a cuantos quieran oírnos.

mas remedio que llamar a la defensa a cuantos
quieran oírnos.

La escuela es vital para los católicos.
Descristianizar desde la escuela no podemos
consentirlo. ¿Que hay gentes que no son
catolicos? Vayamos a la repartición
proporcional. Todo menos dejar los hijos de los
que, gracias a Dios, tienen fe, en manos de quien
no la tiene y quiere arrebatársela.

4.- "Anuncios de escuela única."

"El Debate", 22 de mayo de 1931.

Desde el advenimiento al Poder del actual Gobierno, vienen sonando repetidas declaraciones de los altos directores del ministerio de Instrucción pública sobre un proyecto de "Escuela única". Por circunstancias de todos conocidas, no hemos podido hacer a tales declaraciones el eco que ellas merecen. Hoy comenzamos a tomar en consideración este tema de la "Escuela única", que por su transcendencia pedagógica, social y política, ha sido objeto de largas polémicas dondequiera que se ha intentado llevar a la práctica.

Ante todo, ¿qué es la Escuela única? Definiéndola con palabras de uno de sus defensores, L. Zoratti, es un régimen escolar que suministra a todos los hijos de campesinos, de obreros, de pequeños burgueses, una cultura de igual valor, en establecimientos docentes del mismo tipo, hasta los diez y ocho años de edad.

En términos ya consagrados en la literatura pedagógica, la Escuela única es aquella que prescinde de la posición social y económica de los padres de los alumnos, y los clasifica, los sitúa y los promueve a superiores grados de cultura por motivos de capacidad y de vocación profesional.

Desde un punto de vista psicológico, la Escuela única se opone a la selección apriorística, a predeterminación de unos niños para carreras facultativas y de otros para oficios mecánicos, lo uno y lo otro por razones de posición económica de sus padres y sin tener en cuenta la valía del talento, de las aptitudes, de la naturaleza, en suma, del muchacho.

Esta concepción escolar, que indudablemente tiene su poder de sugestión, y su parte noblemente simpática, crea un grave conflicto, en el que peligra el sagrado derecho de los padres a la educación de sus hijos. A esta tremenda dificultad en que tropieza la Escuela única, han procurado conveniente solución los Estados adictos a tal sistema. Dejando aparte por hoy a Rusia, de que otro día hablaremos, los legisladores de Weimar no escrupulizaron en

admitir una flagrante contradicción en un mismo artículo constitucional, gracias a lo cual puede funcionar en Alemania la Escuela única sin grave quebranto del derecho de los padres. Dice el aludido artículo 146 que "la enseñanza pública se constituirá en forma orgánica, sobre una Escuela básica, común para todos.... En la admisión de un niño en una Escuela dada, no se atenderá más que a su capacidad y vocación, no a la posición social o económica, ni a la confesión religiosa de sus padres". Esto en la práctica sería la mayor de las tiranías y el despojo violento de uno de los derechos naturales más inviolables. Para evitar eso, a renglón seguido, añade la misma Constitución: "En los Municipios deberán establecerse, a instancias de los padres o tutores, Escuelas primarias de su respectiva confesión religiosa o concepción filosófica, siempre que en ello no se impida un sistema ordenando de enseñanza en la forma que preceptúa el párrafo anterior."

He aquí la libertad de enseñanza dentro del mismo sistema de la Escuela única. El Estado impone la graduación de las instituciones docentes, impone ciertas técnicas de organización interna de las Escuelas, pero respeta la acción de los padres para crear Escuelas de su satisfacción, con tal que se atengan a las normas establecidas por la ley.

La Enciclica de Pío XI sobre la Educación de la juventud, que es nuestro canon más seguro para juzgar en estas materias, condena explícitamente la Escuela única, entendiéndola "la obligatoria para todos". Suprimida esta obligatoriedad, y dejando a salvo el derecho de los padres a poner a sus hijos bajo la acción de maestros católicos, no hay inconveniente mayor en que el Estado tome determinadas garantías para el mejor éxito de la enseñanza pública. La familia, dice Pío XI, no es sociedad perfecta que tenga en sí todos los medios necesarios para su perfeccionamiento. Cuando el Estado acude en ayuda de la familia con medios técnicos de educación de que aquella carece, ya no la suplanta ni detenta sus derechos, sino que suple sus deficiencias.

Pero la cuestión de derecho no es toda la cuestión. Queda todavía muy "sub judice" el valor mismo de la Escuela única, su capacidad para dar cumplimiento a los fines objetivos que se propone y la justifican, su posibilidad desde el punto de vista económico. No hay que olvidar que hasta ahora solamente Alemania ha establecido el sistema, reduciéndolo de proporciones. Viena

hace asimismo tanteos, alrededor de los cuales se discute acaloradamente. En Francia no ha salido el proyecto de la fase de comedido ensayo.

Hay, sin embargo, en favor de la Escuela única un movimiento harto propicio a soliviantar a los católicos - la *masonería francesa* acordó en 1923 defender la Escuela única "obligatoria para todos los niños, sin distinción de sexos", y entre todos los hombres de izquierda es común la opinión de que "la Escuela única implica también la Escuela neutra".

He aquí una gran batalla en perspectiva. En ella se va a jugar lo más precioso para los padres de familia y lo más vital para los intereses de los católicos. Defender la Escuela única tal vez sea una consigna de lucha en días no lejanos.

5. "La verdadera libertad de conciencia"

"El Debate", 29 de mayo de 1931.

Las medidas legislativas adoptadas por el ministro de Instrucción pública, acusan una marcada tendencia al monopolio de la Escuela por parte del Estado. Coinciden estos manifiestos síntomas de monopolio docente, con otros actos del gobierno, como el decreto de libertad de cultos, en que se invoca el derecho de gentes y las normas del Derecho público internacional.

No vamos a discutir ahora la tesis de la libertad de cultos; pero el Gobierno se coloca en flagrante contradicción, al establecer esa libertad en nombre de un Derecho público que el dice imperante en todas las naciones civilizadas y negar al mismo tiempo la libertad de enseñanza. El Gobierno hace como que desconoce esa gran conquista de los pueblos modernos, o sea el derecho irrecusable de los ciudadanos a educar a sus hijos en escuelas y con profesores de su libre elección. Y, sin embargo, ese es un derecho público consagrado por todas las Constituciones modernas de Europa. Donde los padres no gocen de la libertad de escoger escuelas y maestros para sus hijos será en vano engolar la voz y hablar de la libertad de conciencia; lo que habrá será coacción y tiranía ejercida precisamente en la parte más débil y más necesitada de protección: en el alma de los niños.

Recabar en España ese derecho debe ser la primordial aspiración de los católicos. La escuela pública que hoy hemos empezado a padecer es una escuela recusable por los católicos. La enseñanza religiosa seccionada de la totalidad de los programas escolares, amputada de la Ética, de la Historia, de la explicación de la Naturaleza y de sus causas, es insuficiente y las más de las veces, contraria a los fines de una educación cristiana. Para nosotros es doctrina firme y segura la de Pío XI en su Encíclica sobre la educación de la juventud, donde dice: "La asistencia a las escuelas católicas neutras o mixtas, es decir, las abiertas indiferentemente a católicos y a no católicos sin distinción, está prohibida a los niños católicos, y solo puede tolerarse, únicamente a juicio del Ordinario, en determinadas circunstancias de lugar y tiempo y con especiales cautelas".

¿Cómo se han resuelto en casi todos los países civilizados del mundo estos delicados problemas de conciencia que plantea la escuela? La solución está en un régimen equitativo de repartición proporcional. La escuela católica, con maestros católicos, nutrida de arriba abajo de la espiritualidad y de la moral de la Religión, tiene derecho no ya a existir sino a participar de los fondos del Estado en justa proporción al número de alumnos que eduque en sus aulas. En nada se opone la repartición proporcional del presupuesto escolar a la "soberanía del Estado". Cuando Clemenceau, como presidente de la Conferencia de la Paz, envió al Gobierno de Polonia el Tratado de Versalles,

afirmaba así esta doctrina de Derecho político: "Las disposiciones relativas a la enseñanza no contienen nada que no se encuentre ya prescrito para los establecimientos escolares de muchos Estados modernos y bien organizados. No es incompatible con la soberanía del Estado reconocer y subvencionar escuelas donde los niños permanecen bajo la influencia de la religión en que se han educado en familia".

¿En qué consistían las disposiciones relativas a la enseñanza? No en otra cosa que en el derecho reconocido a las escuelas de las minorías étnicas, religiosas o idiomáticas, a una parte proporcional en el beneficio de las sumas presupuestadas por el Estado para gastos de enseñanza.

Tenía razón Clemenceau en aducir ante Polonia el ejemplo de "Estados modernos bien organizados". No era el derecho concedido por los Tratados a las minorías étnicas y religiosas de Austria, de Bulgaria, de Hungría, etc., una imposición injusta para estos Estados. La repartición proporcional estaba consagrada en Inglaterra desde 1902 por el "Educational Act"; en Bélgica se había implantado en 1914 por la ley Poulet, estando precisamente en la cartera de Instrucción Pública una socialista, M. Destrée; en Norteamérica eran muchos los Estados que tenían establecida la igualdad financiera de las escuelas públicas y privadas respecto a las subvenciones del Estado.

Después de los Tratados de Versalles, Saint-Germain, Sevres y Trianon, que realizaron jurídicamente lo que llamó Clemenceau "la expresión misma de la civilización moderna", adoptaron la repartición proporcional del presupuesto escolar, Holanda, por la ley de 1920, dada por un ministro protestante, M. Visse, y Chile en el mismo año.

A un estado semejante de derecho hemos de trabajar por llegar los católicos españoles. Una escuela laica impuesta obligatoriamente a todos los hijos de padres católicos y pagada con los recursos extraídos a los contribuyentes católicos es una tiranía moral impropia de la época en que vivimos.

6.- 10 de mayo de 1931. Circular numero 32. A nuestro amado clero.

BOE de Coria, año 66, 13 de mayo de 1931, num. 10, págs. 145-149.

La estrechísima cuenta que hemos de dar a Dios de los fines confiados a nuestra custodia, Nos obliga a redoblar los esfuerzos de nuestra solicitud pastoral, a fin de que nunca falte el pasto saludable de la doctrina cristiana a las ovejas de nuestro rebaño.

Deber nuestro es en verdad trabajar para que aquellos que viven alejados de la fe, lleguen a su conocimiento, como dice el canon 1.350 § 1; pero es aún más apremiante la obligación de promover el conocimiento y la enseñanza de la doctrina revelada en aquellos que por el bautismo fueron incorporados a la Iglesia católica.

Y hemos de trabajar por que todos nuestros diócesanos estén, no superficial, sino profundamente instruidos en la religión, ya que no es tolerable que vivan totalmente ignorantes de lo que profesaron en el bautismo, como a pastores íntegros que nunca oyeron la predicación del Evangelio.

En la catequesis de párvulos y adultos y en la familia dominical tiene obligación el párroco con sus colaboradores de repartir el pan de la palabra de Dios; pero ahora, con motivo de las recientes disposiciones sobre la enseñanza del catecismo en las escuelas nacionales, se nos presenta un peligro enorme, que debemos prevenir a toda costa.

Si los niños no aprenden el catecismo, no lo practicarán; porque faltará a su inteligencia luces insustituibles que alumbrarán el camino de su vida; y a su voluntad, fuerzas que robustezcan la debilidad de su alma apasionada.

¿Y queréis decirnos que será en plazo muy próximo de una sociedad en que la fe y los mandamientos, la oración y los Sacramentos hayan quedado relegados al olvido? ¿Qué freno podrá contener los deseos pecaminosos, cuyas raíces llevamos todos en nuestra naturaleza depravada? ¿Qué carril enderezará nuestros pasos para que no nos despeñemos en los abismos de la lujuria, de la ambición y del egoísmo? ¿Quién tendrá derecho a sujetar las manos del ladrón, el instinto bestial del sátiro, ni el puñal del asesino? ¿Acaso el miedo al castigo? ¿Cuántas veces la persuasión de una impunidad fácil y aún segura ofrecerá un estímulo irresistible a las ansias de venganza y de saqueo?

¿Acaso el respecto a la ley? ¿Y qué ley puede llegar a sujetar los deseos íntimos del hombre, si de la inteligencia humana se suprime ya desde la infancia a la Ley de Dios?

¿Acaso la educación? Pero si aún aquellos que han recibido en su niñez una educación piadosa esmeradísima, llega muchas veces a la más repugnante degradación, porque el veneno de las malas lecturas, la influencia de las compañías perversas y el atractivo del vicio derrumban aquella sólida edificación de

piada; ¿qué horribles frutos no deberemos temer broten en el campo inculto de un cuerpo con instintos de bestia, fecundado por un alma irreligiosa?

Para estudiar concienzudamente la Religión católica, bastaría el hecho de que ella ha sido el alma de nuestra historia patria, sin que jamás pueda comprenderse nuestra literatura, nuestro arte, nuestras conquistas, nuestra colonización, nuestra vida nacional ni internacional, sin conocerla muy a fondo; pero eso que convencerá a un protestante, a un judío, a un mahometano, a un incrédulo, de la necesidad de estudiar nuestros dogmas y nuestras leyes y nuestras costumbres, no puede satisfacer a los que aspiramos a llevar al cielo las almas de nuestros fieles, después de haberles hecho vivir una vida de luz y de dicha, cuya trama está únicamente formada por la fe y la oración, los mandamientos y los sacramentos, tal como los enseña la Iglesia católica, fuera de la cual no hay salvación.

Cuantos tienen uso de razón están obligados a saber y entender estas cuatro cosas para salvarse; y si los padres o los maestros o los catequistas no las enseñan, deber sacratísimo es del sacerdote suplir las ajenas deficiencias y poner manos a la obra sin demora ni descanso. Que así como el hambre del niño o la enfermedad no admite espera ni vacaciones, sino que reclama de sus padres el inmediato remedio, así ante la ignorancia religiosa del niño, mortífera para su vida espiritual, no caben dilaciones ni vacaciones en nuestra tarea catequística.

Quizá parezca dura al principio esta orden para los que se dedican para salvar las almas y salvadas a nosotros; pero si más garantizamos que ha de ser con asistencia en regularidad, con amor de carino, y de respeto, y de colaboración entusiasta.

Desde ahora mismo, por consiguiente, hay que redoblar nuestros cuidados catequísticos; todos los Párrocos deben esforzarse de la actitud en que *efectivamente*, no sólo de palabra, se coloquen todos los maestros de su feligresía; y donde quiera que por el examen de los niños comprueben que se resiente la enseñanza del catecismo, tómenla por su cuenta, valiéndose de cuantos sacerdotes puedan auxiliarlos en este capitolísimo ministerio sacerdotal. Crean que nada contribuirá tanto a formar un pueblo fervorosamente creyente y prácticamente piadoso, a nuestra disposición para toda obra de la gloria de Dios; y que cualquier otra obra será más fácilmente dispensada por Dios, por la Iglesia, y por el mismo pueblo cristiano, que ésta de la enseñanza religiosa de los niños.

No olvidemos tampoco nosotros, y recordémoslo a padres y maestros, lo dispuesto en el Derecho Canónico. *Canon 1.372 y 1. Todos los fieles han de ser instruidos de tal forma desde la niñez, que no sólo se les enseñe nada que se oponga a la religión católica o a la honestidad de costumbres, sino que la formación religiosa y moral ocupe el primer lugar.*

§ 2. *No sólo es derecho y obligación gravísima de los padres, de conformidad con el canon 1.113, (1) sino de todos los que están en su lugar, el procurar la educación cristiana de los hijos.*

(1) Los padres tienen obligación gravísima de procurar a toda costa la educación religiosa y moral, la física y moral de sus hijos, y asimismo de procurar a su bienestar temporal.

Canon 1.373, §1. En todas y cada una de las escuelas elementales se ha de dar a los niños conforme a su edad, la enseñanza religiosa.

§ 2. A la juventud que frecuenta las escuelas medias o superiores, cultívesela con un conocimiento más amplio de la religión y de que esto se haga por sacerdotes de alto grado de fe y doctrina, cuiden los Ordinarios de los lugares.

Canon 1.374. Los niños católicos no asistan a las escuelas acatólicas, neutras o mixtas, es decir, a las que acuden también acatólicos.

Y como en los campos fértiles se cosecha tanto mayor abundancia de fruto y de tanto mejor calidad, cuanto más intenso es el laboreo, hemos de intensificar el cultivo religioso de la niñez y de todo el pueblo, si queremos que florezca la vida de valores cristiano de los fieles; y para ello, aparte de lo dicho anteriormente, disponemos:

1.º Que, además de lo dispuesto sobre catequesis, en todas las misas rezadas de las de días de fiesta, *se explique al pueblo* con atractiva sencillez y claridad un punto de la doctrina o una parte del Evangelio; sin que pase jamás de un cuarto de hora, teniendo a la vista para ello, si es preciso el reloj; y donde haya varios sacerdotes, a fin de que los fieles no tomen pretexto para no ir de que se prolongue la misa con la predicación, recomendamos que la explicación se haga durante la primera mitad de la misa por un sacerdote distinto del celebrante.

2.º Que esto mismo hagan los religiosos en sus Iglesias, de conformidad con lo dispuesto en los cánones 1.334 y 1.346.

3.º En la primera quincena del mes de junio Nos derán cuenta los Párrocos de su actuación en las escuelas; si hay niños que no reciben instrucción religiosa por voluntad de sus padres; cuántos son esos niños y cuántos los padres de familia.

Y por si la negligencia de algunos padres en pedir que a sus hijos se le enseñe la doctrina, o por expresiva confianza, por no creer posible un cambio en la pasada meritisima conducta de los maestros, fuese causa de tal desgracia, préstense los Párrocos a recabar y transmitir su petición, recordando a padres y maestros la gravísima obligación consignada en los cánones transcritos.

Si a la vista del hambre y necesidad espiritual que sienten los fieles, niños y adultos, todos los sacerdotes nos dedicamos a repartir en abundancia el pan de la divina palabra, no tendremos que sufrir en nuestro rostro el lajigazo de aquella terrible lamentación: *Parvuli perierunt panem, et non erat qui frangeret eis.* (Lumen, IV, 4).

Y en vez del abandono en que ahora nos encontramos muchas veces, llorando el desvío de nuestro Clero, hallaremos corazones agradecidos, que correspondan a nuestros desvelos; y diligentemente atendidos y cultivados con las cadenas de la gra-

tud, seguirán las palabras de vida eterna que les dignamos, y cumpliendo con facilísima exactitud los mandamientos de Dios y de la Iglesia, gozarán de una paz espiritual inalterable y Dios les dará por añadidura cuantos bienes temporales necesiten para servirle con alegría.

Que nunca habrá más felicidad temporal en los pueblos que cuando reine en ellos en toda su plenitud el Evangelio.

Y cuando hayáis instruido a muchos para que practiquen la justicia, brillaréis como estrellas en perpetua eternidad (Iltm. XII. 5).

7.- La enseñanza religiosa y la libertad de cultos.

13 de junio de 1931, *BOE de León*, 15 de junio de 1931, núm. 10, págs. 247-269.

En los primeros días del cambio de régimen de Estado, os hemos dirigido, como recordareis, una *Circular*, recomendando la sumisión a los poderes constituidos, en conformidad con la doctrina de la Iglesia y los deseos de la Santa Sede, para coadyuvar al mantenimiento del orden y el bien de la Patria, obedeciendo a las Autoridades civiles, en todo lo que no sea contrario a la Ley de Dios, y procurando prestar de buen grado nuestra cooperación, a fin de evitar trastornos y perturbaciones, y asegurar la paz y tranquilidad. Y así lo hemos venido practicando, cumpliendo con ello una de las obligaciones de nuestro cargo, y laborando a la vez por el bienestar social.

Accediendo a los deseos, que muchos de vosotros habéis manifestado, de que os dijésemos algo acerca de la enseñanza religiosa y la libertad de cultos, os dirigimos esta breve y sencilla *Carta Pastoral*, referente a los puntos indicados.

1. Lo que debemos hacer

Considerando, amados Hijos, la carga abrumadora, que ahora pesa sobre el nuevo Gobierno de España, es indudable que todos debemos prestarle nuestra cooperación, para que más fácil y acertadamente pueda resolver los múltiples y trascendentales problemas para la *Instauración y consolidación del nuevo régimen*; tarea muy laboriosa, y que tanto interesa al bien de la Patria. Y para esto pedíamos también oraciones, a fin de alcanzar del Altísimo luces sobrenaturales, de acierto para los que gobiernan, y de docilidad para los súbditos;

así mismo de amor a la justicia en los que mandan, y de amor a la obediencia en los inferiores.

Debemos, por consiguiente, continuar prestando de buen grado al Gobierno nuestra ayuda y leal cooperación; porque los Gobiernos, sobre todo en los comienzos del regimen, necesitan también que se les propongan orientaciones, que se les infundan alientos, para que no desmayen en sus buenos proyectos de equidad y de justicia. Así mismo que se les expongan las necesidades o aspiraciones de los pueblos, pudiendo tambien hacer reclamaciones o respetuosas protestas por todo lo que redunde en perjuicio de legítimos intereses materiales, o de los que ofendan gravemente los sentimientos religiosos del pueblo católico, tan dignos de todo respeto, conviniendo que lleguen a las altas esferas los tristes ayes de la conciencia lastimada; pero teniendo presente que estas reclamaciones o protestas deben hacerse siempre con el tono respetuoso y la debida consideración a los legítimos superiores.

2. Objeto de esta Carta Pastoral.

Según lo que dejamos dicho, amados Hijos, muy lejos de nuestro ánimo suscitar dificultades o crear obstáculos al Gobierno en su noble empeño de poner remedio a los males, que nos oprimen, y que en opinión de un sabio estadista no deben impulsarse exclusivamente a una situación determinada; sino que son como el resultado final de una serie de causas, que, por la malicia de algunos, por la debilidad de muchos y por complicidad de todos, vienen hace años imponiéndose a una mayoría, que los rechaza. Ojalá sea llegada la hora de despertar a nueva vida, y deshaciendo tantos errores y prejuicios, empiece y se consolide la recta administración de justicia, que es el fundamento de la verdadera política.

Y siendo un sagrado deber de nuestro cargo velar por la integridad de la santa fé católica y la pureza de la doctrina, Nos vemos en la imperiosa necesidad de

consignar nuestra respetuosa pero enérgica protesta contra lo referente a la enseñanza religiosa en las escuelas, y a la libertad de cultos; porque se ofenden gravemente los sentimientos religiosos de la nación, y particularmente de nuestros amados diocesanos, que no solo en su inmensa mayoría, sino casi en su totalidad, profesan nuestra santa Religión católica, única verdadera. Y esto es además una manifiesta violación del Concordato, que es un pacto solemne convenido entre la Santa Sede y el Gobierno español, y a parte de otros inconvenientes o peligros, su violación contribuye en gran manera a perturbaciones, discordias y divisiones cuando con el mayor interés se debe procurar la paz y mayor tranquilidad posible.

3. El beneficio grandísimo de la Religión

¿cuánto nos interesa conservarla?

Es indudable, amados Hijos, que merece la preferencia este beneficio de nuestra santa Religión, y para conservarla y cumplir los deberes que impone, debemos instruir a los fieles, enseñándoles la verdad, deshaciendo y refutando los errores y sofismas con que se la combate, y advirtiéndoles de los bienes, de que se les priva, y derechos de que se les despoja con especiosos pretextos, que están en pugna con la doctrina de la Iglesia, y parecen inspirados en el odio a nuestra santa Religión.

Y siendo la Religión el mayor de los beneficios de Dios para con el hombre, es evidente, que estamos obligados a trabajar con empeño por su conservación, y por el libre y público ejercicio de la misma, a fin de que influya en la enseñanza y en todas las instituciones, para que en nuestra amada Patria todo esté informado del espíritu católico. Así alcanzaremos la prosperidad y felicidad, por que suspiramos, y que inutilmente se buscará fuera de esto; y así esta católica España, de historia

tan brillante, volverá a ser la patria de los grandes hombres, de los grandes santos, de los grandes genios y de heroicas empresas. Son lemas estos, que sometemos a la meditación serena e imparcial, y libre de todo sectarismo.

4. Reproducción de antiguos errores

y trabajos contra la Iglesia

Los que no quieren soportar, amados Hijos, el suave yugo de la ley del Evangelio, hacen todos los esfuerzos por combatir o anular el magisterio infalible de la Iglesia. Los racionalistas, los librepensadores y protestantes reproducen los monstruosos errores antiguos, refutados tantas veces por sapientísimos escritores, y condenados por el severo fallo de la Iglesia, presentándolos con nuevas y engañosas formas y palabras, como decía Pío IX, de feliz recordación «Causa horror, añadia, el pensar los pestilentes errores, con que los hombres de estos tiempos perturbaban las cosas divinas y humanas, para extinguir, no sólo las prácticas y ejercicios piadosos, sino toda idea de honestidad y de religión».

Las sectas, en la guerra que hacen a la Iglesia, sobre todo la masonería, disimulan sus perversos fines, aparentando vanos temores de que el Poder eclesiástico invade el terreno político; así procuran engañar al pueblo, dando a entender que el sacerdocio, saliendo de la esfera de su espiritual ministerio, pretende apoderarse de la dirección política de los pueblos y de la nación; cuando las aspiraciones de la Iglesia se encaminan a influir en el ánimo de los fieles; para que en la sociedad domine la justicia y la caridad; las leyes suavisimas del amor de Dios y del amor a los hombres, que es el primer artículo del Código fundamental o Constitución, de la sociedad humana.

«Vano empeño el de los políticos y gobernantes, que pretenden establecer el orden y buen régimen de la nación prescindiendo de la Ley de Dios y de la moral del Evangelio, de ese código inmortal escrito por el solo supremo y universal Legislador para el régimen y gobier-

no del individuo, de la familia y de la sociedad, de los gobernantes y súbditos, de los estados y naciones. Ahí se ha de buscar la solución de los gravísimos y trascendentes problemas, que perturban el orden social y preocupan a los hombres de Estado. Todo lo que sea prescindir de este sólido fundamento, de estos principios inconcusos, carece de estabilidad y será edificar sobre arena. Guardando la ley de Dios ¡qué contentos y tranquilos viviríamos! Tendríamos el soñado ideal de orden, de paz, de cultura y progreso y de bienestar público. Ahí con qué seguridad andaríamos por todas partes y a todas horas si cumpliéramos el precepto de la caridad? Nuestra vida, nuestra fama, nuestros bienes y cuanto nos pertenece en el mundo, todo estaría seguro: No necesitaríamos ni llaves, ni cerrojos, ni rejas, ni otras defensas, para conservarlos, porque el amor del prójimo sería una llave general, que lo guardaría todo! Que paz, que tranquilidad, que sosiego no habría en el mundo; si cada uno de los hombres cumpliera fielmente los Mandamientos de la Ley de Dios. Así decíamos en la Carta Pastoral de 1920 sobre el quinto Mandamiento, y lo reproducimos por estimarlo también oportuno en estas circunstancias.

6. La enseñanza religiosa en la escuela y el derecho de los padres

Vamos, amabilísimos Hijos, a decir algo sobre la enseñanza religiosa en la escuela, que tratan de suprimir, desconociendo la autoridad de la Iglesia, y despojando a los padres del derecho natural a la instrucción de sus hijos. La instrucción religiosa de los niños es de la mayor importancia, y causa penosísima impresión, que se quite la enseñanza de la Religión, preceptuada en el Concordato, y en la Constitución y en la ley de Instrucción pública. Y si no se respetan estas disposiciones legales, lo que jurídicamente no puede hacerse, al menos por lo que se refiere al Concordato, queda aún en

su vigor y en favor nuestro el derecho natural y divino-positivo; por lo que debemos aconsejar a los fieles, y en particular a los padres, que defiendan estos sagrados derechos, y no consientan ser despojados de ellos, con gravísimos perjuicios y enormes daños para el bien de sus queridos hijos, de la familia y de la sociedad.

El primer maestro, el primer instructor y educador de los hijos, son los padres. El padre es el primer pedagogo de sus hijos, el que tiene el derecho y el deber de enseñar a sus hijos; porque el hijo pertenece al padre, *Illius est aliquid patris*, como dice el Doctor Angélico, el hijo es algo del padre, y el padre no solo engendra al hijo, sino que continua su formación después de su nacimiento.

El Angel de las escuelas y Patrono de la Juventud estudiosa resuelve esto con claridad y precisión admirables, diciendo: «El deber del hijo para con el padre es tan manifiesto, que no hay tergiversación para poderlo negar; porque el padre es principio de la generación y del ser, y además de la educación y de la enseñanza.» Y hablando de la virtud de la piedad dice también: «que el padre es principio tanto de la generación como de la educación y de la enseñanza, y de todas las cosas que pertenecen a la perfección de la vida humana, y este magisterio puede ejercerlo por medio de otro, vigilando para que atienda a la instrucción sin perjuicio del fin principal del hombre; porque el padre debe atender a la educación y a la doctrina, y no solo a la ilustración del entendimiento, sino a la rectitud del corazón»

7. Luminosas enseñanzas de Pío XI sobre la educación de la juventud

Los puntos anteriormente indicados, amadísimos Hijos, han sido expuestos con más extensión y admirable claridad en la preciosa Encíclica de Pío XI, gloriosamente reinante, sobre la Educación de la juventud, en la que se dice: «La familia tiene inmediatamente del »Creador la misión y el derecho de educar a la prole, »derecho inalienable por estar unido inseparablemente

«con la estricta obligación, derecho anterior a cualquier
 «derecho de la sociedad civil y del Estado, y por lo mis-
 «mo inviolable por parte de toda potestad terrena. Es
 «de derecho natural que el hijo, antes del uso de la ra-
 «zón, esté bajo el cuidado de los padres. Sería, pues,
 «contra la justicia natural, que el niño, antes del uso de
 «la razón, fuese sustraído del cuidado de los padres, o
 «que de alguna manera se dispusiera de él contra la vo-
 «luntad de los padres. Y como la obligación del cuidado
 «de los padres continua hasta que la prole esté en con-
 «dición de proveerse a sí misma, perdura también el
 «mismo inviolable derecho educativo de los padres».

«Por esto la sabiduría jurídica de la Iglesia se expre-
 «sa así en esta materia con admirable precisión y clarí-
 «dad: Los padres están gravemente obligados a procu-
 «rar con todo empeño la educación ya religiosa y mu-
 «ral, ya física y civil, y a proveer a sí mismo el bien tem-
 «poral de la misma prole».

«En este punto es tan concorde el sentir del género hu-
 «mano, que se pondrían en abierta contradicción con él
 «cuantos se atreviesen a sostener, que la prole, antes
 «que a la familia, pertenece al Estado, y que el Estado
 «tiene sobre la educación absoluto derecho. Por natura-
 «leza los padres tienen derecho a la formación de los
 «hijos con este deber anejo, que la educación e instruc-
 «ción del niño convenga con el fin para el cual por la
 «bondad de Dios han recibido la prole. Deben, pues, los
 «padres esforzarse y trabajar enérgicamente para impe-
 «dir en esta materia todo atentado, y asegurar que que-
 «de en ellos el poder de educar cristianamente a sus hi-
 «jos, y sobre todo apartarlos de las escuelas, en que
 «hay peligro de que beban el fatal veneno de la impie-
 «dad.»

La Iglesia siempre ha defendido el derecho de los pa-
 dres contra las usurpaciones del Estado, y las familias
 han puesto la mayor confianza en las escuelas de la
 Iglesia, y desde los primeros tiempos hasta nuestros días,

padres y madres, poco o nada creyentes, mandan y llevan por millones a sus propios hijos a los institutos educativos fundados y dirigidos por la Iglesia. Es que el instinto paterno; que viene de Dios, se orienta con fiabilidad hacia la Iglesia, seguro de encontrar en ella la tutela de los derechos de la familia, la concordia que Dios ha puesto en el orden de las cosas.

8. Errores funestos; el naturalismo pedagógico y la escuela laica

Debemos advertiros, amadísimos Hijos, de la falsedad y graves daños del *naturalismo pedagógico*, de que algunos hablan con elogio o defienden inconscientemente. Así mismo advertiros también de que es contraria a los principios fundamentales de la educación la escuela, llamada *neutra o laica*, de la que está excluida la religión, siendo esto motivo bastante, para que no podamos aceptarla. Todos debemos trabajar por la educación e instrucción religiosa de la juventud, principiando por la escuela católica, que es la primera piedra del edificio social.

Al procurar los padres la escuela católica para sus hijos, cumpliendo un grave deber de conciencia, no pretenden, no hacen obra política de partido; ni tampoco pretenden separar a sus hijos del cuerpo ni del espíritu nacional, sino antes bien educarlos en él del modo más perfecto, y más conducente a la prosperidad de la nación; pues el buen católico es por lo mismo el mejor ciudadano, amante de su patria, y lealmente sometido a la Autoridad civil constituida, en cualquier forma legítima de Gobierno.

9. Trabajos en pro de la escuela y de la enseñanza religiosa

Como sabéis, amadísimos Hijos, en la Santa Visita Pastoral siempre hemos dado pruebas de nuestro aprecio y estimación a los señores Maestros, visitando sus escuelas para enaltecer su obra, para alentarles y esti-

mularles en sus trabajos; y también hemos dado pruebas de nuestro especial afecto a los niños, visitándoles así mismo en las escuelas, exhortándoles a la asistencia y aplicación, y aprovechando la ocasión para recomendar a los padres y a las Autoridades el interés por la escuela. Y, teniendo presente las nuevas disposiciones acerca de la enseñanza de la doctrina cristiana, recomendamos a nuestros muy estimados Maestros con el mayor interés, que continúen enseñando la Religión en sus escuelas, asignatura de la mayor importancia bajo todos aspectos, y que tanto interesa al bien del niño, de la familia y de la Patria. Así sus escuelas conservarán el carácter envidiable y muy honorífico, no sólo de católicas, sino de españolas. También les recomendamos la lectura de dicha memorable Encíclica, por la precisión, profundidad y claridad, con que trata los puntos referentes a esta importantísima materia.

Es evidente, que el sectarismo pone especial empeño en invadir los dominios de la familia, y en apoderarse de los derechos de los padres en la instrucción y educación de los hijos; y también en excluir de la escuela la intervención de la Iglesia, que ha sido la Maestra o escuela universal de toda la Europa, continuando la misión apostólica, que le confió Jesucristo, que se llamó Maestro, y único Maestro del mundo. Oigamos todos las infalibles enseñanzas de este Divino Maestro, que es el camino, verdad y vida, y fuera de El no se encuentra sino error, mentira y muerte eterna.

10. Algo sobre la libertad de cultos

También, amadísimos Hijos, con profundo dolor elevamos nuestra viril protesta contra esto, que tan al vivo hiere nuestros sentimientos religiosos, y ofende tan gravemente a nuestra Madre la Santa Iglesia Católica. Muy lejos de nuestro ánimo aludir ni molestar a nadie con estas sencillas observaciones que hacemos tan solo para combatir errores y defender la doctrina de la Iglesia,

guardando para las personas toda clase de respetos y consideraciones. Pues bien, ahora que tanto se encomia y proclama la ley de las mayorías, como soberanía nacional, nadie se atreverá a negar que no sólo la inmensa mayoría de los españoles es católica, sino la casi totalidad es católica; y no vemos la oportunidad y urgente necesidad de la libertad de cultos, que solo desearán los protestantes, ateos o indiferentes, que son relativamente pocos, en comparación con el número de católicos, y como por otra parte es una manifiesta violación del Concordato, ya hemos dicho, que solo podría hacerse de acuerdo con la Santa Sede. ¡Oh! lo que España debe a la Religión, lo que ha hecho y está haciendo la Iglesia por España. Nuestra brillantísima historia nacional está unida a la Iglesia, vinculada a la Religión, y así lo pregonan la cruz y la espada que van unidas.

Por apremios de tiempo no podemos extendernos en consideraciones sobre esto, limitándonos a recomendar con el mayor interés a nuestros amados diocesanos, que con este motivo procuren avivar la fe, dar muestras de sus sentimientos cristianos y de su amor a la Iglesia, asistiendo con más frecuencia a los actos del culto. No desalentándose por lo ocurrido; porque la Iglesia será perseguida; pero nunca vencida. Y Dios en sus inescrutables designios, permite estas pruebas y tribulaciones, para que resulten mayores bienes.

Es indudable que el Gobierno velará por mantener el orden, y conservar la paz y tranquilidad, y para esta noble empresa puede contar con el apoyo de todo buen ciudadano y de todos los católicos, y mas que todo, según pedimos en vuestras oraciones y en la santa Misa todos los días, con el auxilio de Dios, en quien cree, y a quien adora con nosotros la España católica. Pero si desgraciadamente se prescinde de esto, sucederá lo que está vaticinado y confirmado con repetidos ejemplos;

que si el Señor no guarda la Ciudad, inutilmente se desvela el que la guarda, como dice el Real Profeta (1).

11. El Oportuno remedio

Conviene recordar, amadísimos Hijos, algunos hechos muy instructivos, consoladores y edificantes. Cuando se levantó aquella tempestad, que amenazaba sumergir la barquilla de Pedro, en la que Jesús estaba durmiendo, dice el Santo Evangelio; que sus discípulos le despertaron, diciendo: *Domine, salva nos, perimus, Señor, salvanos, que perecemos. Díceles Jesús: ¿De qué temeis, oh hombres de poca fe? Entonces puesto en pie, mandó a los vientos y al mar que se apaciguaran, y siguióse una gran bonanza (2).* Aquí teneis una figura de lo que está pasando. Seamos hombres de fe viva; oremos con gran fervor y confianza, y se calmará la tempestad, siguiéndose también la deseada bonanza.

Se ha desencadenado un furioso vendaval antirreligioso; se han levantado olas de recia tempestad contra la Iglesia, de odio sectario contra todo lo santo, sagrado y religioso, contra tantas cosas, causando inmensa amargura y heridas profundas en el corazón cristiano, como la escuela sin religión, la libertad de cultos, con sus tristes consecuencias. Que sea todo laico o civil, sin carácter religioso. Como si esto fuera el remedio de

(1) Psal. CXXVI, 1.

(2) Math. VIII, 25.

la gran crisis obrera y social, como si con esto se mejorara la situación económica del pobre obrero, que se verá miserablemente engañado, y por el que tanto se interesa la Iglesia, como demuestra el Papa Pío XI en su grandiosa Encíclica *Quadragesimo anno*, de Mayo último, en la que da normas rectas y eficaces para mejorar la situación de los obreros, y resolver los conflictos sociales según piden la justicia y caridad en estos tiempos.

Es indudablemente un cuadro muy triste y sombrío. Esta Patria querida, tan religiosa, parece que está siendo víctima de la tiranía sectaria, del furor de los impíos. Jesucristo, como dormido, según dice el Evangelio, desde el cielo nos está contemplando. Hay que acercarnos a El, despertándole con fervientes plegarias, actos de penitencia, reparación y desagravios, confesándole públicamente como verdaderos católicos, y obrando como tales en todos los actos de nuestra vida, el nombre de católicos es el título más honroso, que podemos ostentar. Invoquemos al Señor pública y privadamente, importunémosle con nuestras súplicas, sobre todo las Comunidades religiosas (con qué fervor, constancia y confianza lo han de hacer). Expongamos todas nuestras necesidades, la angustia y tribulación magna, en que nos hallamos; y Jesús se levantará, mandando a los vientos y al mar y llegará la hora tan ansiada, en que todo se calmará. Cesarán los odios, venganzas y persecuciones, y renacerá el culto con su esplendor, y se fomentarán

las instituciones católicas, cesando las perturbaciones entre las clases obreras y proletarias, y entre patronos y obreros, y llegará esa gran bonanza, que trae la gracia de Dios. Y vivirán los hombres, no el odio y en la persecución, sino en paz, unión y buena armonía, como hermanos que bien se quieren, como hijos de un mismo Padre, que es Dios, y que es todo caridad.

Mas para que se realice tan bello ideal, es preciso ser católicos de fe práctica, hombres de viva fe. Jesucristo atenderá nuestras humildes súplicas, nos concederá lo que pedimos; pero no olvidemos que para esto exige nuestra fe demostrada con las obras. Cuando obró tantos milagros, sanando enfermos de todas las clases y dispensando grandes beneficios, pedía la fe, diciendo: «Tu crees, tienes fe», y entonces concedía las gracias. Pues bien, ahora al invocar su divino auxilio, hemos de pensar, que nos hace la misma pregunta, y triste es decirlo; pero ¿qué responderemos al ver tanta frialdad e indiferencia, tanto descuido y abandono en el cumplimiento de los deberes religiosos, el menosprecio de los Mandamientos de Dios y de la Iglesia, el olvido de las cosas eternas?... Por tanto exhortamos y rogamos por las entrañas de Cristo, como dice el Apostol: a excitar la fe y la piedad, despertar los sentimientos religiosos, a guiarnos en todo por el espíritu de nuestra santa fe, como estamos obligados, y debe nacerlo todo buen católico.

12. Obligación de estudiar los motivos de credibilidad.

Conclusión

Ahora se invoca mucho la libertad, amadísimos Hijos, como si la libertad autorizara para todo, lo bueno o malo, lícito o ilícito, justo o injusto, lo que es un lunetísimo error; porque la libertad, en sus diversas acepciones, tiene sus reglas o principios para el recto uso, como puede verse en el estudio de la sana filosofía, y que no vamos a exponer aquí; pero citamos dicha palabra; porque para muchos es un pretexto para atacar nuestra santa Religión en sus dogmas, en su moral, en su culto y en sus ministros. Quisieran borrar la noción de Dios; debilitar por lo menos las creencias, oscurecer la moral y eliminar la santidad de vida, que los humilla y confunde, al mismo tiempo que les recuerda deberes sagrados, quizá cobardemente infringidos. También pretenden, en su afán de *laicismo*, secularizarlo todo, quitando todo carácter religioso, rebajando así la dignidad del hombre, que reducen a la condición de un irracional, como si no tuviera un alma inmortal, que ha de durar eternamente en la vida futura. Gran sentimiento causa por como se apiaden tan graves y trascendentales errores.

Esta sentencia de Jesucristo: «el que no cree, se condenará» tiene que resonar en los oídos de los impíos, como algo fatídico; y quisieran borrarla; pero vano em-

peño, como decía el eminente Prelado Sr. Martínez Vigil. Veinte siglos han pasado sobre estas palabras, sin borrarlas; y ellas serán en lo futuro, como han sido en lo pasado, la piedra de contradicción, para la vida de unos, y para la muerte de otros.

El hombre, que no creé, tiene al menos obligación de estudiar los motivos de credibilidad, y de inclinarse humilde y reverente ante Dios, para que le infunda el don sacratísimo de la fe; y los que gracias a la divina Bondad, hemos conquistado esa sabiduría celestial, superior a todas las ciencias y a todos los tesoros de la tierra, tenemos derecho, a que nadie nos inquiete en su posesión, a que no se nos arrebate lo que mas apreciamos, ni menos se nos escarnezca por lo que es un verdadero título de gloria.

Terminamos, amadísimos Hijos, recomendando con todo encarecimiento la oración, que hemos de hacer con gran devoción y la mayor confianza; porque con la oración ejercitamos la fe, elevamos la mente a Dios, que es dador de todo bien y el dispensador de la misericordia. Pidamos, pues, con viva fe; con filiales y fervientes instancias el remedio en nuestras necesidades; confiando plenamente en que seremos atendidos; porque Jesucristo ha dicho: *y todo cuanto pidiéreis en la oración, como tengáis fe, lo alcanzaréis* (1). Así lo venimos recomendando con el mayor interés.

(1) Matth. XXI, 22.

Oremos, pues, como queda dicho. Sed católicos prácticos, *de fe íntegra*, y pidamos por el aumento y conservación de la fe, por la conversión de los pecadores, y por el retorno de los protestantes y cismáticos al gremio de la Santa Iglesia; por el libre ejercicio de nuestra santa Religión, y por todo lo demás, según dejamos expuesto.

Pidámoston así por medio de la Santísima Virgen Nuestra Señora del Camino, Patrona de esta Región, *para que todos vayamos por el buen camino*. y Ella nos alcance de su divino Hijo todas aquellas gracias espirituales y temporales. más convenientes y necesarias para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Recibid, Venerables Hermanos y amados Hijos, la bendición, que de lo más íntimo de nuestro corazón os damos en el nombre del Padre †, y del Hijo †, y del Espíritu Santo. Amén

León, fiesta de San Antonio de Padua. en el VII Centenario de su muerte, 13 de junio de 1931.

† JOSE, OBISPO DE LEÓN.

8. - 12 de septiembre de 1931. Instrucción pastoral acerca de la educación cristiana de la niñez y de la juventud: derechos y deberes de los padres.

BOE de Loy, año 12, 20 de septiembre de 1931, num. 16, págs. 371-392.

La recomendación segunda que tenemos que haceros, amadísimos diocesanos, es acerca de la educación en las escuelas y colegios. En todas las escuelas y colegios la educación debe ser cristiana, católica, y los padres católicos, de verdad cristianos, están obligados, con obligación gravísima, a procurar con todo empeño que la educación sea en todas las escuelas y colegios verdadera y profundamente cristiana.

La escuela, filosófica e históricamente estudiada, se ve que es una institución subsidiaria y complementaria de la familia y de la Iglesia. Mas como lo expone Su Santidad en la Encíclica sobre la educación: «Por ser menester que las nuevas generaciones sean instruidas en las artes y en las disciplinas con que se avienta y prospera la sociedad civil, y siendo para este trabajo por sí sola insuficiente la familia, ya en un principio, nótese bien, por iniciativa de la familia y de la Iglesia, mucho tiempo antes que por obra del Estado, nació la institución social de la escuela. De suerte que la escuela, considerada aún en los orígenes históricos, es por su naturaleza institución subsidiaria y complementaria de la familia y de la Iglesia.»

La consecuencia que se deduce de la verdad precedente es que así como la educación en la Iglesia y en la familia debe ser necesariamente cristiana, católica, así también debe serlo en la escuela, en todas las escuelas, de cualquiera clase y de cualquier grado. Hermosamente y con pensamiento muy hondo lo dice el Papa: «Por lógica necesidad moral debe, no solamente no contradecir, sino positivamente armonizarse la escuela con los otros dos ambientes en la unidad moral más perfecta que sea posible, hasta poder constituir, junto con la familia y la Iglesia, un solo santuario, consagrado a la educación cristiana, bajo pena de faltar a su cometido y de trocarse en obra de destrucción. Esto lo ha reconocido manifestamente aún un hombre sejar, tan celebrado por sus escritos pedagógicos (no del todo laudables porque están tocados de liberalismo), el cual profirió esta sentencia: *La escuela, si no es templo, es guarida.*» (Nic. Tommasco. *Pensieri sull'educazione*. Parte I, 3).

Y siendo todo esto así, como lo es, ¿cuál será el primer deber de los padres y madres y en general de las familias ante la avalancha que se nos viene encima de escuelas sin educación cristiana? Damos la respuesta a esta pregunta con palabras del inmortal León XIII: «Por la misma naturaleza tienen los padres el derecho a la formación de los hijos, pero con este deber añejo, que la educación y la instrucción del niño convenga con el fin para el cual, por la bondad de Dios, han recibido la prole. *Deben, pues, los padres esforzarse y trabajar enérgicamente para impedir en esta materia todo atentado y asegurar de manera absoluta que quede en ellos el poder de educar como se debe cristianamente a sus hijos, y sobre todo, de apartarlos de las escuelas en que hay peligro de que beban el fatal veneno de la impiedad.*» (Encic. *Sapientiae christianae*, 10 Enero 1890).

Y aquí tenéis el segundo deber de los padres. El primero impedir que haya escuelas sin educación cristiana; el segundo, si hubiere tales escuelas, apartar a sus hijos de esas escuelas en las que hay peligro de que beban el fatal veneno de la impiedad y de la incredulidad.

¿Que cuáles son estas escuelas venenosas? Bien lo explica Su Santidad Pío XI en la Encíclica que en parte divulgamos con esta Exhortación pastoral. Escuelas venenosas son la escuela laica, la escuela neutra, la escuela mixta, la escuela única tal cual se intenta establecer, pues se pretende que sea obligatoria y laica, aunque a la vez se la llame y aun sea gratuita. Oigamos al Papa. Dice: «Es contraria a los principios fundamentales de la educación la escuela llamada neutra o laica, de la que está excluida la religión. Tal escuela, además, no es posible prácticamente, porque de hecho viene a hacerse irreligiosa. No es menester repetir cuanto acerca de este punto han declarado Nuestros Predecesores, señaladamente Pío IX y León XIII, en cuyos tiempos particularmente comenzó a embravecerse el laicismo en la escuela pública. Nos renovamos y confirmamos sus declaraciones, y al mismo tiempo renovamos y confirmamos las prescripciones de los Sagrados Cánones en las que la asistencia a las escuelas católicas, neutras o mixtas (es decir, las abiertas indiferentemente a católicos y no católicos sin distinción) se prohíbe a los niños católicos, y puede tolerarse únicamente a juicio de los Obispos en determinadas circunstancias de lugar y tiempo y con cautelas especiales.»

Hasta aquí el Romano Pontífice. No lo olvidéis, amadísimos doctores. La autoridad suprema de la Iglesia condena las escuelas laicas y neutras y mixtas en sentido

religioso y los niños católicos no pueden asistir a tales escuelas y sus padres están obligados con gravísima obligación de conciencia a no enviarlos. ¡Cuántos conflictos sociales y de conciencia pueden sobrevenir y sobrevenirán, si llegara a establecerse la escuela única que se proyecta, escuela que sería laica y obligatoria! Por eso ahora urge que los padres cristianos desarrollen todo su esfuerzo y toda su energía, como ordena el Papa, para que escuela tan perniciosa y tan ruinosa, aunque fuera gratuita, no se implante. Muy bien que el Estado abra puertas a todos los ciudadanos aptos para que puedan entrar en el alcázar del saber y subir a las categorías más altas de la jerarquía social; pero para eso no es necesario establecer escuelas laicas o neutras o mixtas. ¿Por qué juntar aspiración tan noble, cual es la de favorecer a todos los ciudadanos en el campo de la cultura, con tendencias sectarias y orientaciones anticatólicas, anticristianas e irreligiosas? ¿Quién ganaría? Nadie, ni la Iglesia ni la Patria. Todos perderíamos a la corta o a la larga, mejor dicho, a la larga o a la corta. Laboremos todos a una por la educación de todos los ciudadanos españoles; pero por la educación perfecta, integral, y por tanto acabada en el orden humano y acabada en el orden religioso.

Y en el momento presente, en las circunstancias actuales, ahora en el mes de septiembre del año que corre, ¿qué deben hacer los padres católicos que son casi todos los padres españoles? El tercer deber que tienen que cumplir es pedir en debida forma que los maestros enseñen religión católica a sus hijos y poner en juego todos los recursos legales y amistosos para que la enseñen con el mayor celo y competencia y esforzarse para que no quede un padre sin hacer esta petición, y así continuará siendo la escuela pública española, un santuario; un santuario en el que desde su trono de luz y de amor presida Jesucristo clavado en la Cruz, Jesucristo que es la luz del mundo, Jesucristo que es el Maestro divino de la humanidad.

Conocéis las disposiciones legales vigentes en la materia de que tratamos y ¡ay de los padres que se duerman y no cumplan el deber gravísimo que tienen de impedir las consecuencias horribles que de tales disposiciones pueden derivarse! La apatía y dejadez de los padres católicos puede ser la causa de que ya en el curso que se avecina, deje de enseñarse la Religión en las escuelas públicas y el Crucifijo sea destronado y colocado como un objeto de arte cualquiera en cualquier rincón del salón-escuela. ¡Horroriza pensar que esto puede ocurrir; pero ocurrirá si los padres católicos se duermen o continúan dormidos. ¡Que responsabilidad la que tendrá ante el tribunal de Dios, ante el cual si se hacen efectivas todas las responsabilidades!

Poned en juego, amadísimos diocesanos, todos los recursos *legales y amistosos para impedir que el laicismo penetre en la escuela pública española*. Si todos los padres y madres católicos de verdad se lo proponen, no habrá un maestro que deje de enseñar la Religión. Concepto muy *elevado* tenemos de los maestros nacionales de esta diócesis; muchos de ellos son *beneméritos* en grado muy alto de la enseñanza religiosa; a todos les suplico que por el amor que tienen al niño, al alma del niño, alma naturalmente cristiana, alma que tan dulcemente se abraza con el alma divina del Niño Jesús, persigan enseñando la Religión en sus escuelas, y de acuerdo con los padres y madres continúen laborando para el engrandecimiento de la Patria en *unidaje sublime de amor y concordia* con la Iglesia.

Para que los padres puedan llenar los requisitos legales *al caso pertinente*, a continuación de esta *instrucción* pastoral se inserta el modelo de solicitud que deben dirigir a los maestros pidiendo que a sus hijos sea enseñada la Religión en las escuelas públicas.

9. - S. f., "Enseñanzas dolorosas para los padres católicos."

SOE de Zaragoza, año 70, 16 de septiembre de 1931, num. 73, págs. 412-415.

«Os prometí—escribe el señor Obispo de Málaga—casos confirmatorios de casi todas las perversiones y de los extravíos de los jóvenes; más veces se encuentran en la «mala gracia» del maestro que en argumentos o negaciones razonadas de maestros o de libros. Y entre los mil que pudiera contaros, que he conocido en mi no corta vida de educador de almas, voy a citaros dos que, aunque de efectos contrarios, tienen la misma fuerza probatoria.

«En una Residencia «neutra» de estudiantes, unos papás ecclésiásticos, bobalicones, pusieron a estudiar a su primogénito. ¡Tenía tanta fama aquel centro de la gran ciudad! ¡Hablaban tan bien de su pedagogía, de su alta cultura, el cacique y el médico del pueblo, que allá tenían sus pimpollos!

Conocía yo al muchacho, que era, en toda la extensión de la palabra, un buen mozo de cuerpo y alma, noble, sincero, piadoso, simpático... Mis razonamientos, temores y prevenciones, no consiguieron apartar a los papás bondadosos de aquella, a todas luces, funesta determinación. Y allí fué el mozo con el decidido empeño de darse baños de cultura y finura y de «alternativa cortesana», frase favorita del cacique.

«Al cabo de dos o tres años, en la estación del ferrocarril, hube de encontrarme con el mozo aquel. En verdad, había ganado en elegancia y atildamiento; pero ¡cuánto había perdido en frescura y color de cara, en alegría e ingenuidad de mirada y en todo su aspecto de muchacho sano de cuerpo, alma y corazón!

Después de tratar de evitar el encuentro conmigo y de afectar no recordarme, puesto ya al habla con él, conseguí entrar en diálogo, y pasando por encima de muchas ruinas de inocencia desmoronada, pureza perdida, fe cuarteada, desilusiones y hastíos, pude llegar a formar el proceso de aquella triste y dolorosa transformación.

«Saqué en limpio que el muchacho fué a la Residencia y en ella estuvo valiente, alegre y bueno, hasta que una maldita gracia del director le envenenó.

«Llegó tan valiente en su fe católica, que el primer día de abstinencia que se presentó pidió sin rodeos ni rebozo, y obtuvo sin dificultad, comida de vigilia. ¡El solo en toda la Residencia! Y repetía la petición cuando llegaba el caso. Hasta que un día, en una reunión de todo el colegio vino a decir el director, a vuelta de otros encomios de la labor cultural y educativa del centro:

«Aquí, decía a los escolares, no queremos otra cosa que cultura. ¡Vuestra cultura por encima y a pesar de todo! En lo demás, ya lo habéis visto, somos genéricamente tolerantes... y miramos con el mismo tolerante silencio al escolar que se chupa la pipa, que se come las uñas, que se orina en la cama, que al que «metiendo la religión en la cocina», da determinados días culto al dios habalao.

«Las risotadas y miradas burlonas arrancadas para cada uno de los aludidos en aquella lista de flaquezas ridículas, dicha por la mala gracia del fariseo maestro, fueron el zarpazo de tigre que abrió brecha en la hermosa alma y en las bellísimas ingenuidades y valentías de pobre incauto. Y por la brecha abierta, en su fe valiente, por la burla del envenenado ingenio, ¡qué gusanera hablan arrojado dentro la conyunción libre de los compañeros, la novela inmoral, la procacidad de las compañeras de clase y toda esa corte de gusanos, dorados por fuera y horriblemente infecciosos por dentro, que como plaga mortal cae sobre nuestros jóvenes para ponerles tísicos del cuerpo, y enfermos o muertos del alma!»

Hasta aquí el sustancioso artículo del Sr. Obispo de Málaga.

Y a continuación escribe un padre católico: «es frecuente que padres católicos se encuentren con estas desagradables sorpresas por obstinarse en no querer ver los peligros de esas residencias neutras de estudiantes o de esas asociaciones escolares aconfesionales que no son más que un distras con que se encubre el propósito de descristianizar a los jóvenes que ha de formar el sector intelectual de la patria. También entre nosotros se dan casos de esos que refiere el señor Obispo de Málaga.

Un hijo de distinguida familia católica va a una residencia neutra de estudiantes de la Corte, adonde le llevan, con ligereza que después han de lamentar, sus padres, atraídos por el cebo de la cultura y «finura» de que parece acreditado aquel centro. Se presenta con su bagaje católico; también como el del ejemplo anterior, se conduce al principio como tal.

Pero con el trato continuo observa que no se guarda con él ni con su religión la decantada neutralidad; vienen después las «malas gracias» de unos y otros, las risas y bufonadas de los más, a falta de argumentos más poderosos: se repiten los ataques írrónicos a la práctica de su religión; y el muchacho que no tiene ni mucho menos el valor de sus convicciones que requiere aquel ambiente cargado de hostilidad, empieza a claudicar.

Ante esas demostraciones, los compañeros y aun los superiores cambian de táctica para hacerle completamente suyo. Han sustituido las burlas por las pruebas de consideración y estimación. La obra está consumada; lo demás viene ello solo. El muchacho se crece; ahora cuenta ya con el aplauso y apoyo de los que antes le denostaban; es presentado y admitido en sus círculos, con toda clase de respetos; avanza un paso más y... y ya está en la

Vanguardia de esas instituciones escolares que defienden el laicismo en la enseñanza, que fomentan la algarada revolucionaria, que se manifiestan radicales en política y religión, siquiera sea solapadamente para no alarmarle tanto. En suma, ha arrojado por la borda casi todas sus convicciones religiosas y por ello ha merecido una gran distinción y ocupa ya uno de los primeros puestos en la directiva de esa institución puesta en entredicho por la Iglesia. Y ahora, los padres, a lamentar amargamente el mal paso dado, que probablemente no será tan fácil de corregir.

¿Cuándo se convencerán los padres católicos de esta verdad que les están pregonando a voz en grito hechos de esta índole, que tantas lágrimas ha costado a madres celosas, por otra parte, de la educación cristiana de sus hijos?

Madre ha habido que educó cristiana y piadosamente a su hijo hasta la entrada en la juventud, y después en el período universitario, se metió él en esas o parecidas instituciones peligrosas para la fe y moral cristianas (en lo que, como de costumbre, no pusieron gran cuidado sus padres; con tal de que su hijo «se hiciera hombre»); y cada día se fué alejando más de su religión hasta venir a parar en una degradante apostasia, con sus fatales consecuencias, matrimonio civil, la prole sin bautizar, etc. Y la madre cristiana, llena de angustia y de remordimientos, desciende con el corazón traspasado al sepulcro.

Tampoco es necesario ir a Andalucía para conocer casos de estos; bien cerca los tenemos. ¿Cuándo querrán aprender los padres de estudiantes con lecciones tan dolorosas!

10.- S.f. "Cuestiones de actualidad.- Omnis qui zelum habet... exeat (1 Mach, 11-27)" y "Cuestiones de actualidad (continuación).- Siembra por la mañana ... y por la tarde"

BOE de Zaragoza, año 70, 16 de septiembre de 1931, núm. 18, págs. 414-419.

BOE de Zaragoza, año 70, 1 de octubre de 1931, núm. 19, págs. 421-425.

También publicado íntegro en *BOE de Tarazona y Tudela*, año 69, 5 de septiembre de 1931, núm. 671, págs. 696-706.

Reproducido de *Revista Catequística*, año XXI, págs. 290-293 y 323-326.

Llena de angustia el alma comenzamos este artículo recordando las palabras del profeta Oseas, que insertó S.S. Pío X en la Encíclica "Acerbo nimis" al contemplar los horribles estragos de la ignorancia religiosa: *Non est scientia Dei... Propter hoc luget erra.*

Un caballero noble y cristiano nos decía con lágrimas en los ojos: "¿Qué va a ser de mis hijos?" ¡Dichosos los hijos, le replicamos, que tienen un padre como usted!

Pero es lo triste que en esta hora de encarnizada lucha por arrebatar los pequeñuelos a la Inglesia... ¡son tantos los padres que tratan de apartarlos del buen Jesús, o a lo menos no los llevan a El! ¿Qué haremos los discípulos? ¿Qué hemos hecho hasta aquí?...

Qui zelum habet... exeat... redoblemos el celo... vamos al combate por la gloria de Jesucristo, por el bien de los niños.

Para educar, decía D. Andrés Manjón, se necesita la cooperación de padres, sacerdotes y maestros; de las leyes y costumbres (!). Consideremos este ambiente y agentes de la educación como fuerzas, que según el sentido e intensidad con que actúen, tendrán mayor, o menor eficacia.

Si alguno de estos sumandos es nulo han de suplir su acción los demás. Si obra en dirección contraria, será mayor el esfuerzo que hayan de realizar los otros; pues no sólo les falta ayuda, sino que han de contrarrestar la destructora labor del adversario.

A la luz de estas sencillas consideraciones, dirigiendo la mirada a la escuela y a la familia, a las costumbres y a las leyes ¿cómo poner el esfuerzo vigoroso e inteligente, que exige de

nosotros la salvación de los niños y el porvenir de la Iglesia? ¿Se comprende ahora la trascendental importancia de la pedagogía. Catequística? ¿Qué otra ciencia hay que más promueva el celo por la Catequesis y oriente mejor para que ese impulso y celo influya eficazmente en la educación cristiana de la juventud? Ante los denigrantes atropellos y profanaciones que la salvaje incultura está realizando ¡qué responsabilidad la de aquellos que hayan omitido la enseñanza de la Doctrina Cristiana, o la hayan explicado *ineptissime*, como afirma la Sagrada Congregación de Seminarios! ¿Y no atribuye la misma Sagrada Congregación ese descuido, e ineptitud, a la falta de formación pedagógico-catequística? No insistiremos nosotros en una verdad tan palpable. Nunca como en estos aciagos días podrá entenderse mejor la letra y el sentido de las dos Circulares referentes a esta materia (1).

No queramos cerrar los ojos ante los peligros que se nos presenta. El Sr. Unamuno, en el Consejo de Instrucción Pública ha propuesto la *escuela única*.

¿Y qué es la escuela única? Ya lo indicábamos en el número anterior, antes de que hubiera ocurrido el cambio de régimen.

En el orden jurídico, un atentado contra los padres y maestros (2). Como declararon los Prelados de Francia, es "la expropiación de la familia y la confiscación del niño" (3).

En el orden religioso, el indiferentismo absoluto, el laicismo y más bien la hostilidad contra la Iglesia.

En el orden moral, aun prescindiendo de lo que un Inspector llamaba "promiscuidad de los dos sexos, alabándolo como gloriosa conquista de la escuela nueva, recordemos que cuando Viviani se propuso apagar las luces del cielo, el diputado socialista Allar le replicó: No os hagáis ilusiones; sin Dios no hay moral".

(1) Del 8 de septiembre de 1926 y del 28 de agosto de 1929 de (A.A.S., vol. XVIII página 453 y vol. XXII pág. 148).

(2) Véase la Encíclica *Divini filius Magistri* (A.A.S., XX-49).

(3) Mgr. Ricard, *Enfance et Jeunesse*, núm. 8, pág. 15.

Todos aquellos libros de Moral, unida a la instrucción cívica, se van suprimiendo por inútiles. "Todo cuidado que poníamos en moralizar pongámoslo en no moralizar" (4), dicen los partidarios del laicismo.

Schulz, el pedagogo demócrata, rechaza toda enseñanza de la Moral en la escuela única (5).

Pero ¿qué va a ser entonces de la sociedad?

A esta pregunta responde un profesor de la Sorbona: ¡allá se las haya! Y Compayré, en un arranque de sinceridad, ha dicho: "Si continúan así las cosas, llegaremos a ser el pueblo más bestial de la tierra".

Los primeros pasos en el camino trazado por el Sr. Unamuno los había dado ya el Ministro de Instrucción Pública con el decreto del 6 de mayo, que a continuación transcribimos:

Para respetar la libertad de conciencia, en que se basa el decreto, hubiera bastado con dispensar de la enseñanza religiosa a los alumnos cuyos padres lo indicasen (6); en vez de exigir que hayan de manifestar su deseo los que quieran la referida Instrucción para sus hijos.

Bien clara es la gran distancia que hay entre ambas cosas, dada la negligencia de muchos padres. Aparte de que en varias naciones como ocurrió en Italia, antes del fascismo, suele pasarse de ahí a quedar a la Religión fuera del horario escolar.

Se presenta, pues, al párroco y a los católicos un nuevo campo de acción: convencer a los padres de cuánto les va a ellos mismo en que sus hijos aprendan la Doctrina Cristiana.

Por algo el Concilio de Trento, al prescribir a los pastores de almas la catequesis de niños, une la instrucción en los rudimentos de la Fe, con la obediencia a los padres.

(4) *Datrenne. Cours de pédagogie* cit por Mgr. Ricard.

(5) *Die Schulreform der Sozialdemokratie*, Km, 1917.

(6) El Real Decreto de 25 de abril de 1913 dice: Art. 2º Quedan exceptuados de recibirlas (las enseñanzas de Doctrina Cristiana y Nociones de Historia Sagrada) los hijos de los padres que así lo deseen por profesar religión distinta que la católica.

Si el maestro declara su deseo de no dar enseñanza religiosa se confiará según el artículo 39 al sacerdote.

Y aquí se nos presentan no leves dificultades. ¿Qué prudencia y sagacidad no ha de ser necesaria para ponerse de acuerdo con el maestro acerca de las horas! Desde luego la clase de Religión no ha de caer fuera del horario de la escuela.

Pero ¿Cuánto tiempo ha de durar? ¿en qué días?... "Habrá lección corta, *pero diaria* de Doctrina Cristiana, acompañada de alguna parte de Historia Sagrada en que se vean aplicadas las máximas y preceptos que se hayan explicado, acomodando estas instrucciones a la capacidad respectiva de las diferentes clases" dice el art. 39 del Reglamento de Escuelas Públicas de Instrucción primaria, del 26 de noviembre de 1838, artículo que expresamente declaró en vigor el Real Decreto de 1913 en su art. 12 y que aún lo está, pues no se halla en pugna con el actual decreto.

Vea pues el sacerdote, consultado el Ordinario, de obtener las mayores ventajas: un tiempo en que los niños no estén fatigados, una distribución que le permita graduar la enseñanza. Todo esto supone que el sacerdote se ha preocupado de estas cuestiones pedagógicas. En una escuela en que el maestro prácticamente da a entender su desdén por el Catecismo, ¿basta con que quien se encargue de su enseñanza lo haga a la buena de Dios, perdónese la frase, sin formación esmerada y sin preparación remota y próxima? Una enseñanza fría, y que cause aburrimiento ¿podrá tener eficacia? ¿Será muy provechosa la enseñanza memorista y rutinaria? Comparaba D. Andrés Manjón esta instrucción a los cangilones de noria, que tan pronto se llenan de agua como se encuentran vacíos... limpios y frescos.

En las Catequesis parroquiales y otros Centros Catequísticos también hemos de intensificar nuestro celo. Y acordémonos de que entre las cualidades que ha de tener el celo se halla según San Bernardo, *la ciencia* (aquí no sólo el saber, sino el saber enseñar y educar) además de la caridad y la constancia (7).

(7) Serm. IX in cant, "*inflammant charitas, informant scientia, firmet constancia*".

Ante el encarnizado empeño de los enemigos de Cristo y de su Iglesia por arrancar la fe y la virtud del alma del niño, sería inconcebible que en un pecho noble pudiera reinar la indolencia.

Ha llegado el tiempo en que sacerdotes y catequistas redoblemos, y multipliquemos el celo. Con más motivo que en los días de Gersón hemos de hacer inmediatamente... todo lo que podamos; hemos de sembrar por la mañana, y por la tarde no hemos de cesar en el trabajo... (8).

Para orientarnos vamos a concretar algunas ideas y disposiciones de la Circular del 13 de mayo del Director General de Primera Enseñanza, publicada en la Gaceta del 22.

Dice así:-

Hagamos notar primeramente el párrafo en el cual se indica que "la supresión de la enseñanza religiosa con carácter obligatorio no debe significar abandono en la dirección moral de los escolares..."

Esta afirmación ¿es sincera? ¿No hemos visto en el número anterior cuáles son las tolerancias de la escuela única? ¿No nos lo están recordando continuamente sus partidarios?

En la Prensa se publican todos los días declaraciones, conferencias, proyectos, acuerdos que prueban el afán de no moralizar, es más, el satánico empeño en arrancar la fe a toda costa aun pervirtiendo y excitando a los escolares a la rebelión y al desprecio de lo más sagrado.

Pero supongamos que es sincera; ¿es realizable? Prescindiendo de la Religión, ¿qué ideales ha de proponer el maestro? ¿qué altos ejemplos fuera de los del Divino Modelo y los que siguieron sus huellas? ¿Qué estímulos para la humildad, la caridad y el sacrificio? ¿Qué freno contra las pasiones, qué esperanza en los infortunios? ¿Con cuánta exactitud llama el P. Weis al irreligioso "un lisiado moral"! (9). Y luego añade: "En los estrechos límites de su existencia tiene el individuo tantas cargas que soportar, tantos peligros que superar, tantas tentaciones que vencer, que se ve obligado a repetir con frecuencia las palabras de Schopenhauer: "Para esto no es bastante la filosofía".

(8) Eccl. II-10 y XI-6 *De parvulis trahendis ad Christum Cons.* III.

(9) *Apología del cristianismo*, vol. I, pág. 368. Muy de actualidad es la conferencia IX "Sin religión no hay hombre completo".

Cuando el laicismo en Francia llegó a borrar todo vestigio religioso en... ¡la Gramática, la Historia y hasta el *Silabario*! ocurrió con uno de estos (10) un caso que constituye una lección elocuente. Para enseñar a los niños cómo se pronuncia la J, el autor había escogido la palabra *juge*, y el grabado representaba a un juez en su tribunal. Detrás de él se hallaba el crucifijo. Por ser *contra la neutralidad*, en el clisé mandaron borrarlo. Pero, impensadamente (o acaso de intento), el grabador completó su obra... haciendo desaparecer a la vez la balanza y la espada, emblemas de la justicia.

La Circular precisa ya la hora de la instrucción religiosa; la primera o la última de la mañana o de la tarde. Ambas tienen sus inconvenientes: la primera, como enseña la experiencia, porque, algunos niños llegan tarde; la última porque ya están fatigados. El remedio se hallará en el primer caso en estimular la puntualidad, y en el segundo en hacer que a la instrucción religiosa preceda inmediatamente un ejercicio fácil, que cause poca fatiga mental. Téngalo presente el sacerdote para conseguir cuanto pueda en el caso en que sustituya al maestro. Esmerese sobre todo en que su explicación sea sencilla, atractiva, interesante, metódica y principalmente llena de unción.

La hora primera, o última parece referirse claramente al caso en que alguno de los padres no haya manifestado el deseo de que sus hijos reciban instrucción religiosa. Que si todos la quieren no se da ya el motivo que asigna la Circular de que "no se interrumpa la estancia de los alumnos en la escuela. Entonces el maestro cristiano escogerá sin duda la hora más conveniente para el aprovechamiento de los alumnos; lo mismo hará el párroco, o sacerdote en sus visitas...

Pero... ¿acaso están vigentes aún las disposiciones que atañen a la visita de las escuelas por el párroco?..

Supongamos, como ocurre en muchas escuelas, que todos los niños asisten a la lección de Catecismo e Historia Sagrada porque así lo quieren sus padres; y que el maestro da la instrucción religiosa. No se opone el Decreto, ni a la Circular el que alguna vez ceda de buen grado su

(10) El Régimbeau Duplessy *Les Anis de Mutinaud*, pág. 185.

puesto al sacerdote, y que sin perturbación del horario, de acuerdo con el maestro, visite éste la escuela para mayor fruto y estrecha unión.

Cuando algunos alumnos no asistan a la instrucción religiosa ya hemos dicho a qué hora podrá el sacerdote hacer la visita. Y si por no encargarse el maestro, él le suple ya dijimos cuanto celo ha de despegar.

No queremos que se nos olvide una discreta norma. ¡Ahí sí que es necesario el orden cíclico, comenzar por lo más esencial, lo de mayor trascendencia! Y esto ha de repetirse muchas veces, en una u otra forma, haciendo que llegue al corazón de los niños y se penetren bien de ello. Tal era la táctica que el P. Arnáiz observaba en sus Doctrinas (11). No estaría de más traer aquí lo que, hablando de la memoria, pusimos en nuestra Pedagogía acerca de la limitación de la materia. (12).

Terminaremos con una indicación respecto al crucifijo y cuadros o imágenes. No dice la Circular que se quite el crucifijo, cuando algunos padres no se hallen conformes en que continúe dándose la instrucción religiosa. Puede exhibirse en la clase aunque no presida la vida escolar. Pero a El podrán dirigir los alumnos sus miradas maestro y alumnos que tengan la dicha de amar con toda su alma a quien tanto nos ama.

Los cuadros e imágenes, dice la Circular, han de ser reproducción de preciosas obras de arte. Y la Didáctica enseña que en pintura y escultura, como en literatura, los niños a veces no entienden ciertas obras clásicas, y hay que explicárselas, y es preciso saber escoger imágenes que hablen al entendimiento y al sentimiento, a la cabeza y al corazón.

Daniel LLorente

(11) Antonio García, Penitenciario de Málaga. *El Padre Arnáiz, Compañía de Jesús*. Datos biográficos y rasgos edificantes, página 1

(12) Tratado Elemental de Pedagogía Catequística, 2ª edición,

11. — "¿De quién son los niños?"

S. I., BOE de Palencia, año 81, 1 de octubre de 1931, núm. 21, págs. 640-641.

Cuando José, con ternas lágrimas, abrazando a su padre que llegaba a Egipto le presentó sus dos hijos, Manases y Efraín, le preguntó Jacob: *¿Quiénes son éstos?* — *Son hijos míos, que el Señor me ha dado...* (Gen 48.)

¿Tendrán ellos los padres que repetir esas palabras, no para presentar sus hijos al anciano que con amor entrañable se apresura a bendecirlos, sino para insultos del tirano que pretende arrebátárselos?

Porque para los partidarios de la escuela única, no es el maestro un representante, o encargado y auxiliar de los padres de familia; los padres son, contra los maestros, delegados del Estado; y unos y otros no tienen más atribuciones que las que el Estado les confiere.

¿Quién podrá aguantar tales dislates?... Veamos cómo los refuta un sano y celoso Priado en una Instrucción Pastoral (1).

«¿Será preciso preguntarnos ahora de quién es este niño? Si cuestión alguna ha parecido innua y aun impudica, lo es ésta, sin duda; y con todo se impone, en vista de una doctrina más odiosa aun que tiránica, que haría de suscitador de un paganismo abyecto.

Si, se ha dicho y se ha escrito, no podrá leer todos los días en esas hojas malditas cuyas doctrinas detestables oís con frecuencia, que el niño es, ante todo, del Estado, que pertenece al Estado antes que a su padre; y que el Estado tiene el derecho de marcarle con su estampilla oficial, a la manera que se marca en la tibia el ganado vil, sobre el que tiene el nuevo amo derecho de vida y de muerte. Era precisa esta monstruosa doctrina para justificar otra aun más monstruosa de que tiene el Estado el derecho de modelar a su gusto el alma del niño.

¿El niño, del Estado! ¿Pero no se levanta una protesta unánime contra tan absurda teoría? La voz de la naturaleza que reclama sus imprescriptibles derechos, la voz de la sangre que pregunta sus reivindicaciones, la voz del corazón unido indisolublemente a ese ser querido, la voz del amor, la voz de la abnegación que quieren continuar sacrificándose por él... Y todas estas voces serán siempre bastante poderosas para ahogar la del Estado, por muy fuerte que sea, y para decirle: No, el niño no es ante todo vuestro, es del padre y de la madre, como el bien más querido y más tiernamente amado...

¿Quién ha traído a la vida a ese niño? ¿Ha sido el Estado? ¿Quién ha velado junto a su cuna? ¿Acaso el Estado? ¿Quién lo culló en sus primeros años? ¿Quién le cria y le alimenta? ¿El Estado por ventura? ¿Quién vela su juventud y adolescencia? ¿El Estado? ¿Quién ha respondido por él ante la ley cuando no era responsable por sí mismo? ¿El Estado?

(1) Mgr. Ricard, Arzobispo de Auch. *Enfance et Jeunesse*, núm. 8 pag. 25.

No, no, ningún sofisma, ninguna mentira podrán evitar que el niño sea primeramente de sus padres. Mirando a su hijo el padre y la madre podrán decir siempre: es nuestra carne, es nuestra sangre, la prolongación de nuestro ser, la supervivencia de nuestro nombre, de nuestros bienes, de nuestro honor, de nuestras virtudes.

La formación familiar de este niño es, según expresión hermosa y profunda de un gran autor, un segundo alumbramiento, como un seno místico donde calentado por el mutuo amor del padre y de la madre, se desarrolla el niño y crece y se orienta en definitiva muchas veces, hacia la verdad y hacia el bien.

12.- "Circular núm 108. Sobre la urgencia de la instrucción catequística."

16 de noviembre de 1931, *BOE de Valencia*, 1 de diciembre de 1931, núm. 2136, págs. 381-384.

El sagrado deber que Nos impone el Canon 711, en su párrafo 2.º, de «procurar que en todas las parroquias esté erigida la Congregación de la Doctrina Cristiana», es testimonio preciosísimo de la previsora sabiduría de Nuestra Santa Madre la Iglesia, que en sus preceptos nos señala el remedio eficaz para los males que aquejan a la sociedad.

De evidencia meridiana es que la ignorancia religiosa constituye el principio y fundamento de todos los trastornos sociales que padecemos. Las concupiscencias y la soberbia, a que es tan dada nuestra naturaleza caída, han de causar necesariamente las torpezas del egoísmo y la ambición desmedida de goces y placeres. Una mirada atenta a la historia de la humanidad nos hace ver que solamente el espíritu de la Religión Cristiana tiene virtud eficaz para elevarnos y ponernos en camino de las aspiraciones hacia el bien que sentimos todos, como natural consecuencia de nuestro principio en Dios creador y de nuestro destino para la eterna bienaventuranza; estas aspiraciones luchan con nuestras torpezas, hijas del pecado original, y esta lucha, que el Apóstol San Pablo nos describe tan maravillosamente, es la que nos pone en la ineludible condición de vencer con Cristo o de ser vencidos por el torbellino de las pasiones humanas.

Hoy se pretende dar por anticuado al Cristianismo y desacreditar la Doctrina Cristiana, atribuyéndole como fracaso suyo lo que en realidad no es otra cosa sino las tristes consecuencias del olvido de los principios fundamentales del espíritu cristiano, cometiendo la sinrazón de hacer responsable a la Doctrina Cristiana precisamente de los efectos producidos por no haberla seguido fielmente.

Es también frecuente pretender demostrar la incompatibilidad de la fe religiosa con el progreso de las ciencias, y aunque tales argumentos se levantan sobre sofismas y se encadenan con mala fe, aunque se ha comprobado mil veces su falsedad, se ofrecen con aparatosa seducción halagando a la soberbia y a las concupiscencias.

No prosperarían estas propagandas del mal si la ignorancia religiosa no les diera ambiente adecuado; ved por qué, carísimos hermanos y amadísimos hijos, es hoy de extraordinaria urgencia la instrucción catequística para que la confianza en la virtud del espíritu cristiano sea sólido fundamento de una fe viva, práctica y verdadera. Es preciso que el pueblo cristiano sepa con certeza que las verdades de su fe religiosa no son incompatibles con ningún progreso científico, sino que, por lo contrario, tanto cuanto más se acerca a la verdad el entendimiento humano, más y más se siente penetrado del espíritu de Cristo y de su obra, la Iglesia, que siempre ha sido, es y será protectora de la investigación leal, del estudio sincero y del verdadero progreso. Es preciso que el pueblo cristiano sepa cómo la Iglesia, por medio de las augustas enseñanzas de los Sumos Pontífices, ha sido, real y verdaderamente, la INICIADORA de todas las mejoras sociales, ya que, como consecuencia del poder dado por Dios al hombre para aprovechar las fuerzas de la naturaleza, la ley del trabajo ha de dulcificarse a medida que el estudio hace adelantar el progreso, como consecuencia lógica y natural de la suprema y soberana ordenación de Dios Nuestro Señor: es muy triste que el pobre pueblo se crea obligado a agradecer a los enemigos de la Iglesia los beneficios que se le ofrecen, que muchas veces no pasan de promesas, y que la Iglesia ha sido la primera en inspirar, la más constante en proponer, y no cesa de inculcar, cumpliendo su misión de iluminar, con la luz de Dios, las inteligencias de los hombres, para que la paz y el bienestar contribuyan a la consecución del destino temporal y eterno de las criaturas.

Nuestro deber pastoral se siente confortado por la confianza que Nos inspira el buen espíritu de nuestro amadísimos Clero y carísimos fieles, tan eficazmente auxiliado por el celo y fervor de los Institutos religiosos; pero las circunstancias requieren que redoblemos nuestro esfuerzo, pues la evidente realidad nos demuestra que es mucho lo que queda por hacer en lo que se refiere a la instrucción religiosa, y en su consecuencia venimos en disponer:

1.º Que antes de fin de año todos los reverendos Párrocos de la Archidiócesis envíen a nuestro Secretariado Diocesano de Acción Católica una comunicación dando cuenta de la marcha y estado actual de su respectiva Congregación de la Doctrina Cristiana, al tenor de lo mandado en el Canon 711 arriba citado en nuestra Circular núm. 31 de 1.º de marzo de 1926, inserta en el número 1.998 del BOLETÍN OFICIAL.

2.º Los reverendos Curas reunirán, bajo su presidencia, a los feligreses cuyo significado ce'lo inspire la confianza de que puedan capacitarse de cuán necesaria es su cooperación para este fin, y en esta reunión darán lectura a la Circular antes citada núm. 31, a Nuestra Circular núm. 16 (BOLETÍN OFICIAL núm. 1.977 de 1.º de mayo de 1925) y a las muy acertadas disposiciones de nuestros predecesores que en esta misma Circular se aducen. La lectura de estos documentos será muy eficaz para persuadir y decidir a sacerdotes, religiosos, religiosas y piadosos fieles, a fin de que el estudio y la enseñanza del Catecismo propague y extienda la instrucción religiosa para gloria de Dios y bien de la Patria.

Valencia, 16 de noviembre de 1931.

† PRUDENCIO, *Arzobispo de Valencia.*

Esta Circular será leída a los fieles en la forma acostumbrada.

13.- "La Confederación de Estudiantes Católicos cumple el 13 aniversario de su fundación".

"El Debate", 5 de marzo de 1993.

En el mes de marzo de 1920 se constituyó la Confederación de estudiantes Católicos de España. Había surgido la idea en la Universidad madrileña y coincidiendo con el propósito de los fundadores, la entonces naciente *Internacional de Estudiantes Católicos "Pax Romanas"*, requirió a los universitarios españoles para que formasen una de las organizaciones nacionales que habrían de ser base fundamental.

Una serie de estudios previos precedieron al primer acto público, celebrado por la Confederación de Estudiantes Católicos de España, en Madrid y al que siguieron incesantes mítines de propaganda en las provincias limítrofes a la capital y después, en la totalidad de las Universidades españolas. Estos actos eran otras tantas revelaciones del éxito inicial de la Confederación y de la valía personal de sus iniciaciones, miembros de un sector intelectual, sólidamente preparado.

Orientaciones profesionales

Los fundadores de la Confederación imprimieron a ésta un carácter de novedad innegable, al caracterizarla por una orientación fundamental, profesional y universitaria. La Confederación se asignó como finalidades primarias, las tareas de mejora de la enseñanza y defensa de los intereses profesionales de sus asociados. Toda esta labor, habría de estar inspirada en principios confesionalmente católicos, ya que la neutralidad no puede lograrse ni en el orden de las ideas, ni en el de las actuaciones concretas. Pero siempre en una relación de medio, con respecto a la finalidad profesional.

De aquí que fuese indispensable concretar, en las afirmaciones básicas de un programa, la aspiración de los Estudiantes Católicos en orden a la enseñanza. Y estas afirmaciones, proclamadas en un acto público que se celebró en el teatro de la Zarzuela de Madrid, el 13 de mayo del año de 1920, fueron tres *claras ideas fundamentales*: autonomía universitaria, libertad de enseñanza y examen de Estado. Afirmaciones que, a lo largo de las distintas Asambleas Confederales, fueron concretándose incluso en proyectos de ley articulados que, si no hubiesen sido aprobados en discusión pública, nadie hubiera creído obra de una organización estudiantil.

Las Casas del Estudiante

Al mismo tiempo que las Asociaciones se constituían, surgieron las "Casas del Estudiante", como expresión de las actividades de cultura de los estudiantes católicos.

En las Casas del Estudiante tienen su domicilio la Federación local y las distintas Asociaciones de Estudiantes Católicos que forman aquella. La de Madrid -inaugurada el año 1921 con asistencia de los entonces ministros de Instrucción pública señor Silió y rector de la Universidad señor Rodríguez Carracido, numerosos catedráticos y extraordinaria concurrencia de escolares- se estableció en la Puerta del Sol (Mayor, 1) y, desde aquella fecha, no ha cerrado sus puertas. En ella, como en las demás que fueron surgiendo en toda la Península los estudiantes organizan clases de idiomas, cursillos de repaso o de investigación, círculos de estudios, academias, conferencias públicas y cuantas actividades pueden ser índice de un auténtico afán de perfeccionamiento cultural o progreso científico.

Autonomía universitaria y reformas de enseñanza

El primitivo programa de los Estudiantes Católicos fue siendo objeto de estudio detenido por parte de las distintas Asambleas Nacionales de la organización. El primer motivo concreto de actuación profesional, lo tuvieron los estudiantes católicos con ocasión de la concesión de autonomía a las Universidades hecha, en 1920, por el entonces ministro señor Silió. Breve fue la vigencia del decreto de autonomía, pero durante ella pudo acreditarse que los estudiantes católicos contaban con la mayoría de la masa escolar organizada. En Madrid, de quince estudiantes (tres por Facultad) delegados en el Claustro, los estudiantes católicos obtuvieron once puestos.

Suspendida la autonomía, se declararon incansables defensores de ella y en sucesivas Asambleas confederales, fueron concretando su pensamiento, a lo largo de toda una serie de conclusiones, en las que se encierra un vasto programa de Reformas universitarias, o de estudios especiales.

Un Congreso internacional

En agosto y septiembre de 1929, los estudiantes católicos españoles organizaron un Congreso de la Internacional "Pax Romanas", que celebró sus sesiones en Barcelona y Sevilla. Un tren especial, con trescientos cincuenta delegados extranjeros recorrió nuestra patria, y tanto la parte externa de organización del Congreso, como la intervención de los delegados españoles en sus sesiones, alcanzó una brillantez no superada por anteriores reuniones de la Internacional.

Otras actividades

Son muy numerosos los libros, folletos y revistas escolares publicados para hacer historia de lo realizado en trece años de existencia por la C.E.C.E.. Ni siquiera para enumerar las distintas ramas de su actividad contamos hoy con espacio suficiente. Desde sus cursos de Cultura Religiosa y Moral profesional, hasta la organización de representaciones del teatro clásico o actividades deportivas, hay un campo de realidades logradas en armonía con las aficiones más diversas y las preocupaciones más diferentes. Las Semanas y Fiestas del Estudiante, de que nos ocupamos en otro lugar, son buena prueba de ello. Grandes solemnidades académicas, artísticas, científicas, podíamos citar en prueba de nuestro aserto. Baste -no es posible otra cosa- la mera indicación.

Cuando se escribe historia sobre obras, tan fecundas como la Confederación de Estudiantes Católicos de España, es más difícil llenar pocas columnas de un diario que muchas páginas de un gran volumen enjundioso.

14. --"Circular dando ordenaciones y haciendo recomendaciones al empezar el año."

14 de enero de 1932, *BOE de Tux*, año 73, 18 de enero de 1932, núm. 1, págs. 3-17.

Año nuevo vida nueva; esto es, vida renovada. Y se renueva por la reforma de lo defectuoso y por el perfeccionamiento de lo imperfecto. Al empezar el año debemos todos, y principalmente los que hemos sido enriquecidos con la divina dignidad del sacerdocio, examinar nuestra conciencia para ver lo que haya en nuestra conducta defectuoso e imperfecto, y después formar firmes y prudentes propósitos para crecer en santidad de vida y así ser instrumentos de las misericordias de Dios cada día más dóciles, más aptos, más eficaces. Resonem en lo más hondo de nuestros corazones aquellas palabras del Apóstol: *Renovamini spiritu mentis vestrae* (Eph., IV, 23) y aquellas otras de Nuestro Señor Jesucristo: *Estote ergo vos perfecti sicut et Pater vester coelestis perfectus est.* (Matth., V, 48). Para que el examen de conciencia sea más fácil y oportuno y los propósitos más acertados, en lo que toca a la vida externa de la Diócesis, llamamos la atención sobre las siguientes ordenaciones y recomendaciones, que juzgamos de primaria necesidad para la intensificación de la vida cristiana en la amadísima grey que Nos está encomendada.

CATEQUESIS. --A ninguno de nuestros colaboradores sorprenderá que nuestra primera recomendación sea acerca de la Catequesis para los niños. Bien lo saben todos que es la obsesión dominante de nuestro espíritu. Esta obsesión no Nos deja sosegar ni Nos permite dejar en calma a los demás. Si pudiéramos hacerlo, todos los días clamaríamos con clamor que se extendiera por toda la Diócesis: ¡Párrocos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, maestros, caballeros y señoras de la Acción Católica y todos los que sentís los ardores divinos del celo apostólico, enseñad el Catecismo a los niños, enseñadlo siempre y en todas partes, en la iglesia y en la escuela, en el hogar y en la calle, en la ciudad y en el campo...

En todas partes el Herodes del laicismo y de la impiedad persigue al niño para perderlo y en todas partes el apostolado de la Catequesis debe defender al niño, sea que el niño se presente en grupos numerosos, sea que se presente en grupos de reducido número, sea que se presente un solo niño. ¡Cuántas veces Nuestro Redentor dulcísimo consagró sus horas divinas a un alma sola o a pocas almas! Recordad la Catequesis de la Samaritana...

Con este número del *Boletín* recibirán los párrocos un impreso para que lo llenen y Nos lo devuelvan antes del 15 de Febrero. Se lo rogamos a todos que Nos lo devuelvan con puntualidad. Como verán, con los datos que en el indicado impreso Nos faciliten, Nos será fácil formar concepto del estado de las Catequesis en el primer trimestre del curso catequístico, y así podremos dar las instrucciones convenientes y tomar las medidas canónicas oportunas para que durante la Santa Cuaresma y el Tiempo Pascual todas las Catequesis funcionen con la mayor intensidad y los frutos de catequización sean abundantísimos.

Quisiéramos que todos nuestros párrocos, sacerdotes y religiosos estuviesen ya plenamente persuadidos de que lo primero es la Catequesis y de que no hemos de parar, con el favor de Dios, hasta lograr que la obra de la Catequesis funcione con la mayor perfección posible en toda la Diócesis y primeramente en el Seminario, donde haremos cuanto podamos para que sea el Centro Catequístico modelo y tipo, al que puedan recurrir para su orientación e ilustración todos los otros centros de la Diócesis.

PREDICACION Y MISIONES.—La segunda recomendación es acerca de la predicación del Santo Evangelio y del Catecismo a los adultos. No puede omitirse ni lo uno ni lo otro ningún día festivo. Los sacerdotes encargados de dos parroquias, prediquen en las dos Evangelio y Catecismo, bien las dos cosas en las dos parroquias todos los días dedicando unos minutos a cada cosa, bien en una parroquia Evangelio y en la otra Catequesis y al día siguiente viceversa, para que así todos los feligreses reciban instrucción evangélica y catequística.

Con la exposición del Evangelio y del Catecismo mezclen sabiamente las enseñanzas de actualidad que hay que dar a los fieles acerca de documentos Pontificios y episcopales, según se ordene oportunamente.

Por último recordamos el canon 1349 que prescribe que los párrocos procuren a sus feligresías una Santa Misión por lo menos cada diez años. No pocas se dieron el año pasado; más deben darse este año, por lo mismo que los aires son tan irreligiosos. Hay que ahogar el mal con la abundancia del bien y vencer las tinieblas de los errores ímpios con las luces de la verdad cristiana sembrada a manos llenas.

PROPAGANDA CATOLICA.—Iusistimos una vez más en la necesidad de la propaganda católica; revistas, folletos, periódicos, hojas volanderas, etc., hay que dilun-

dirles por toda España a millares, a millones. Aprendamos de los hijos de las tinieblas que son para la consecución de sus fines, más prudentes que los hijos de la luz. ¿No veis qué propaganda tan extensa y tan potente la suya? ¡Honórrala contemplar los estragos que está haciendo. No bastan las funciones esplendorosas del culto ni basta la predicación y catequesis estrictamente eclesástica; su complemento indispensable es la propaganda de la buena prensa.

Para ello ¿qué hacer? Procurarse impresos y repartirlos profusamente, pero con discrección para que no se malogren. ¡Qué buena liturgia para las almas dedicar todas las semanas o todos los meses alguna cantidad para comprar impresos de propaganda católica y repartirlos! En Vigo existe un centro de propaganda «Lux Vera». De nuevo lo recomendamos. Se han fundado nuevas editoriales para la impresión de folletos y hojas que son oportunísimos. En otro lugar de este *Boletín* se inserta la dirección. Para facilitar la adquisición de este material de propaganda, en el Secretariado Diocesano de Acción Católica, establecido en nuestra Curia Diocesana, tendrán a su disposición folletos y hojas, todos los que deseen trabajar en esta labor de apostolado tan necesario y transcendental.

— — —
— — —

LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS.—Hemos dejado para la última esta recomendación que es complemento de la primera, la Catequesis. Nos asaltan temores dilacerantes de que ni los párrocos ni los religiosos, mucho menos los seculares, aún los piadosos, se han dado cuenta perfecta del peligro horrendo y satánico que amenaza y ya envuelve a nuestros niños. La escuela obligatoria y laica debiera quitarnos el sueño y organizarnos y lanzarnos a la defensa de la niñez. Y ¿qué hacemos? ¡Cuán poco es!

Creer muchos que las tempestades más desastrosas son las acompañadas de truenos atronadores, y no es así. La tempestad que ya está descargando sobre la escuela en España, tempestad de laicismo, de irreligiosidad, de impiedad inmunda, está descargando casi sin ruido; son medidas particulares y locales, y cuando son generales, no son leyes, sino órdenes y circulares, a veces de autoridades subalternas. Pero, así, sin ruido casi, van demoliendo la escuela cristiana. Y entre tanto los párrocos y sacerdotes, los religiosos y religiosas, los padres de familia y los seculares, aún los más piadosos, ¿qué hacen? ¡Ay! ciertamente la acción defensiva no está proporcionada a la acción ofensiva. El resultado será un desastre.

Por esto. Nós, el aster, aunque indigno, de esta Dióce-

sis, levantamos nuestra voz y clamamos: Párrocos predicad *opportune et importune* en favor de la educación cristiana y contra la escuela laica; sacerdotes, trabajad en todas las formas que podáis para que los niños reciban educación cristiana; padres de familia, mirad que Dios os pedirá cuenta del alma de vuestros hijos; religiosos y religiosas, no olvidéis que lo primero es iluminar con luz de enseñanza religiosa el corazón del niño; maestros y maestras, no apostatéis de vuestra misión altísima de educadores cristianos y tened como lema: *¡antes el hambre, primero la muerte!*; personas piadosas, enamoradas de los esplendores del culto y de los resplandores de las lámparas, ¿qué importan todos los esplendores y resplandores, si se apaga la luz de Cristo en las almas de los niños...?

Vamos todos, a una, a emprender la gran campaña contra la escuela laica y en favor de la enseñanza cristiana. Y para ello Catequesis y predicación apostólica; propaganda católica y apoyo jurídico y social y moral y material a los maestros cristianos; recomendación y limosnas en pro de los colegios católicos; fundación de escuelas privadas católicas; influencia por todos los medios justos y legítimos sobre los maestros, para que cumplan el deber que Dios mismo les impone de ser maestros católicos; actividad social y política para impedir las consecuencias funestísimas de las disposiciones anticatólicas que se van dando y para lograr cuanto antes que sean derogadas, todo por vías justas y legítimas y con el concurso de todas las buenas energías, como nos lo ha dicho el Romano Pontífice.

Amadísimos párrocos, difundid por doquiera estos clamores del corazón amargadísimo de vuestro Obispo.

— — —

15.- "Jesucristo en la escuela. Circular."

25 de enero de 1932, BDE de Oviedo, año 68, 1 de febrero de 1932, núm. 3, págs. 39-42.

Los problemas religiosos artificiosamente creados en España adquieren relieves, a nuestro juicio, de persecución real y efectiva, tal vez sin intención manifiesta y deliberada de las autoridades superiores. Parece que no basta a cada día su afán y se añade: malicia, sobre malicia.

Al establecerse la República, Nos, llenos de optimismo, ante la perspectiva de una colaboración de todos los hombres de buena voluntad os aconsejamos, amados fieles, el leal acatamiento y obediencia a toda autoridad constituida de hecho por exigencias del bien común. Hubiéramos deseado, y todavía esperamos conseguirla, una leal colaboración en busca de la justicia y de la paz y del legítimo progreso a costa de cualquier sacrificio compatible con la santa libertad de las conciencias cristianas.

En la cuestión política aportamos el principio y la ley de nuestro Señor Jesucristo: *Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César*. Creíamos que, al menos indirectamente, podríamos colaborar en una elevada política cumpliendo con abnegación creciente los sagrados deberes de nuestro ministerio para glorificar a Dios y salvar las almas. Creíamos que ante los gravísimos problemas sociales la Iglesia podía aportar un caudal enorme de ciencia y de acción, inspiradas en la justicia y en la Caridad. En la Caridad también, porque la misma justicia exactamente cumplida deja lagunas profundas que solo el amor puede llenar para establecer sólidamente la unidad, no solo entre los hombres del mismo país sino del mundo entero.

Pero, sobre todo, en el orden de la cultura y de la educación integral, esperábamos una mayor tolerancia y comprensión mutua, una fraternidad en aras del ideal científico al que los hombres de todas las ideas pueden aportar su caudal laboriosamente adquirido. Para eso contábamos con la libertad de enseñanza sin la cual no podría existir entre nosotros ninguna verdadera libertad, ni gobierno que con justo título se llame democrático, si no garantiza y promueve las legítimas libertades individuales.

Seguimos todavía esperando, tal vez contra toda esperanza, y por eso denunciarnos ante los Superiores, como un elemento contrario a la paz y disociador de los espíritus, la última circular del Sr. Director de Enseñanza ordenando la desaparición de la imagen de Jesucristo en las escuelas primarias y con ella toda enseñanza religiosa.

Creemos que se puede acusar en esa disposición un exceso de celo y hasta queremos creer que se procede de buena fe.

Un exceso de celo, porque disposición tan grave prejuzga y coacciona la soberanía de las Cortes y la autoridad del Gobierno que tienen anunciada una Ley sobre Enseñanza y excede por lo tanto las atribuciones de una autoridad subordinada, que no sea suprema en la Nación.

También se acusa la buena fe de la Circular cuando se manda que no se hieran los sentimientos religiosos. Si para entender estas palabras, se suprime la buena fe, el consejo adquiere los caracteres de una cruel ironía o de una burla sangrienta. Porque ¿cómo puede ser que de una escuela católica, frecuentada por alumnos bautizados con el bautismo de Jesucristo, dirigida por maestros católicos sea retirado el Crucifijo sin herir los sentimientos religiosos de todos? El hecho, aunque no lo pretendan sus autores, producirá una herida tan honda en el espíritu del niño que no se cicatrizará mientras viva, sangrará siempre con sangre de amor o de odios, porque Jesucristo, conocido por el niño como el Dios-Hombre, no puede serle ya indiferente; o le rodeará con su amor, o le blasfemaré. Jesucristo es ya para los niños de nuestras escuelas una Fe y un Amor divinos, una verdad y una vida sobrenatural que en el orden de los afectos y de los mismos sentimientos son los más grandes que pueda abrigar el espíritu del hombre.

Por eso, según hemos leído hoy mismo, al ser retirado el Crucifijo de la escuela graduada de una de nuestras parroquias, los alumnos prorrumpieron en lágrimas y en tan altos sollozos que no permitían oír la voz tranquilizadora de los maestros. Esto nos trajo a la memoria aquella terrible sentencia de Jesús, que oculta su humildad y mansedumbre, la que dijo a sus discípulos cuando tomó un niño y le sentó sobre sus rodillas: «Al que escandalizase a uno de estos pequeñuelos que creen en Mí más le valiera que le colgaran al cuello una rueda de molino y le echaran al profundo del mar.»

Para lanzar de todos nosotros tan terrible amenaza, para purificarnos de toda culpa de omisión o de silencio, para cumplir con nuestro sagrado deber en defensa de la inocencia de los niños, Nos exhortamos a todos nuestros amados diocesanos a que eleven a las autoridades locales, como Nos lo hacemos por estas letras a la Suprema autoridad, una respetuosa y enérgica petición, en virtud de derechos que están sobre toda humana criatura, para que se conserven en las escuelas las imágenes de Jesucristo y de la Santísima Virgen María y que se permita la enseñanza de la doctrina Católica a todos los niños bautizados. Esperamos que una petición constante y decidida a no cejar en el legítimo derecho, sería muy pronto atendida, ya que una voz autorizada se ha servido declarar que el *laicismo* no es entre nosotros la irreligión y menos todavía la impiedad. La disposición que con profunda amargura denunciamos, por su propia naturaleza y por sus inevitables consecuencias hiere la conciencia católica y vulnera las leyes divinas y eclesásticas en materia de educación.

Creemos que está en manifiesta oposición con la ciencia y la experiencia de la Pedagogía, ya que las ideas y los hechos demuestran cada día con mayor y más dolorosa evidencia que sin Religión no hay Moral y sin Moral no hay derechos y deberes eficazmente exigibles ni fundamento para una sólida educación.

Disminuye además, la dignidad de toda enseñanza; porque Jesús es el Maestro divino, es la Verdad; y arrojarle de una escuela católica es negar ante los alumnos el prestigio y la autoridad de todo Magisterio humano.

Roguemos, amados fieles, a Jesús Niño para que defienda y proteja la Fe y la inocencia de los niños predilectos de su Sagrado Corazón por intercesión de su Santísima Madre la Virgen María de Covadonga, dulcísima Madre, vida y esperanza de la católica Asturias y de España.

Enero 25 de 1932.

† JUAN, Obispo de Oviedo.

16. - "Los problemas de la enseñanza. - Los padres de familia contra la circular que los excluye."

[El Debate], 13 de diciembre de 1931.

Vulnera derechos naturales de los padres de familia católicos

Quebranta principios fundamentales consignados en la Constitución

El presidente de la Confederación Católica de Padres de Familia ha dirigido al ministro de Instrucción pública una instancia sobre la circular que excluye a dichas Asociaciones de los Consejos de Enseñanza y pide la revocación de dicha circular por estas razones:

Primero. Marca un criterio que no responde a precepto alguno legislativo. Segundo. Vulnera los derechos naturales, universales y humanos de los padres de familia católicos.

Tercero. Quebranta principios fundamentales consignados en la Constitución de la República española.

Los párrafos sustanciales de la instancia dicen:

"Hace años que esta Confederación promueve y patrocina la creación y funcionamiento de las Asociaciones de Padres de Familia, porque estamos persuadidos de que es necesario despertar una nueva preocupación familiar por los problemas escolares y porque es indispensable acercar los padres a la escuela, para que los maestros cuenten con la asistencia social que su función educadora necesita.

Cuando se dictó el decreto del Gobierno provisional de la República, de 9 de junio de 1931, en virtud del cual se daba representación en los Consejos Escolares a las Asociaciones de Padres de Familia, no había en España otras organizaciones de esta clase, que las agrupaciones en esta Confederación. Lo demuestra el hecho de ser las únicas que en aquella fecha estaban constituidas legalmente, y el hecho de ser su actuación iniciadora de un movimiento de ciudadanía de un movimiento de ciudadanía por la enseñanza, la única que públicamente era conocida en España.

Algunas de estas Asociaciones ya habían obtenido su representación en los Consejos escolares. Todas se disponían a ocuparse de este asunto, en el ejercicio de legítimos derechos, cuando ha sobrevenido la circular del director de Primera Enseñanza, negándoles en absoluto esta participación.

Nosotros, señor ministro, hemos buscado afanosamente el precepto legal, no ya expresivo y terminante, sino aun dudoso, que autorice esta arbitraria exclusión, ordenada por el director de Primera Enseñanza. Este precepto no existe. Contrariamente el artículo sexto del decreto de junio de 1931 se refiere a "Asociaciones de Padres de Familia, sin establecer distinción, y no es preciso recordar una máxima, que es regla inflexible para toda hermenéutica legal: "Donde la ley no distingue, no se debe distinguir".

Además, se da el caso de que, según antes dijimos, actualmente no existen otras Asociaciones de Padres de Familia constituidas legalmente, con vida propia y que respondan a una realidad, más que las Asociaciones que forman esta Confederación.

Para que la norma establecida en la circular tuviera efectividad, habría que crear con este solo fin unas nuevas Asociaciones, que no obedecieran al propio estímulo de los Padres de Familia, preocupados por la enseñanza de sus hijos. En cambio, si servirían a inspiraciones políticas de partidos, y resultará que las Asociaciones creadas con posterioridad a la fecha de la circular mencionada serán la expresión de una verdadera ficción legal, porque no han nacido espontáneamente ni responden a una realidad social.

Pedimos, por lo tanto, que se rectifique el criterio expuesto en la circular de 23 de noviembre último, y que, en consonancia con el precepto del artículo sexto del decreto de 9 de junio de 1931, sea admitida en los Consejos escolares la representación de cualesquiera Asociaciones de Padres de Familia, siempre que estén legalmente constituidas, aunque sean confesionales.

17.- "El duro ataque a la enseñanza privada".

"El Debate", 31 de diciembre de 1932.

Hoy termina el plazo asignado para la información pública sobre las bases de reforma de la primera enseñanza, que abrió hace quince días la Comisión parlamentaria. Queremos creer que la información no habrá sido infructuosa y que un criterio de justicia hará meditar a la Comisión sobre las propuestas presentadas por diversos sectores de la sociedad española y organizaciones técnicas de la enseñanza privada, que piden una reforma pedagógica para todos los españoles, libre de sectarismos y propicia para disfrutar solidez y permanencia mediante el asentimiento y el concurso de toda la opinión del país. La fecha nos obliga, por ese mismo motivo, a nosotros a precisar el análisis de las bases, a las que recientemente dedicamos un general comentario. Análisis que en esta hora hemos de condensar en un sólo punto concreto: la situación en que el proyecto deja a la enseñanza privada. Porque, a nuestro juicio y prescindiendo de otros detalles técnicos, en éste el más grave problema de cuantos en la ley en embrión pretenden resolverse.

Son las bases, rotundas y categóricas en la determinación de todas las atribuciones que el Estado se confiere en materia de enseñanza escolar primaria. Mas no así en las que a la sociedad competen. Diríase que en este punto los autores del proyecto han procedido con un criterio de preterición inadmisible. Las bases empiezan por nombrar, con tono desdeñoso y en el último lugar, a las escuelas no nacionales -tal ocurre en la base primera- como si fueran, en realidad, las de menos importancia en la perspectiva de la organización escolar. Mal se compagina, en verdad, este desdén con el precepto que la Constitución vigente, en el párrafo segundo del artículo 43, establece, al imponer a los padres "el deber de instruir y educar a sus hijos". Deber de difícil cumplimiento si al menospreciar y restringir la enseñanza privada, no se otorga a los padres la libertad necesaria para esta instrucción y educación. Porque he aquí, además, que en virtud de la mencionada base primera, el Estado se sale de la obligación subsidiaria que contrajo por aquel artículo constitucional e invade de tal manera el terreno privado, que la que queda colocada, en realidad, como subsidiaria, en relación a la enseñanza oficial, es la que la sociedad, esto es los padres de familia han de establecer para cumplir el deber, constitucional también, de educar e instruir a sus hijos. Se ha vuelto, pues, la oración por pasiva, en un afán sectario de erigir al Estado en educador casi exclusivo, con todas las graves consecuencias de índole administrativa y económica y con todos los perjuicios y daños que para los más sagrados derechos individuales, tal monopolio significa.

Mas no paran ahí las agresiones a la enseñanza privada. La base primera afirma también que "el ministerio determinará las condiciones en que se autoriza el funcionamiento de las escuelas no nacionales, siempre bajo la

inspección del Estado". Huelga decir que tal afirmación es inadmisibile. Una ley escolar no puede preterir los principios de regulación de la enseñanza privada y abandonarla al arbitrio ministerial. Las cosas claras ante la ley. Sin escamoteos y prestidigitaciones. Que tal cosa es olvidar por completo el artículo 49 del Código fundamental, donde taxativamente se dice que "una ley de Instrucción pública determinará las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza de los establecimientos privados". Se dice una ley! Ley que lógicamente debe ser ésta. Y una ley no es el capricho de un ministerio.

Tampoco lo son los caprichos de los Consejos de Protección Escolar a los que la base tercera atribuye "la revisión de las actuales escuelas privadas y proponer su continuación o clausura". He aquí el precepto más agresivo de cuantos las bases consignan para la enseñanza no oficial. Porque, en realidad, estos Consejos, ya constituidos con anterioridad a las bases, son en su actual organización la máscara propicia para el arbitrio ministerial y el cacicato pedagógico. Un decreto bien oscuro y complicado, por cierto, tan oscuro, que ha necesitado ya dos circulares aclaratorias de la Dirección de Primera Enseñanza, constituyó los Consejos en el mes de julio de 1931. Son estos de tres tipos: provinciales, locales y simplemente escolares. Los dos primeros son de riguroso establecimiento oficial. El tercer tipo es una "graciosa" concesión ministerial en casos determinados. En los locales campea la representación del Estado. La de la sociedad es exigua. Un padre y una madre de familia. Análoga cosa ocurre en los escolares, donde la representación de la sociedad aún duplicada sigue siendo minoritaria. Concebidos así los Consejos, a los que en principio nada tendríamos que oponer, quedan reducidos a organismos burocráticos de control estatal. Más, por si fuera poco, estos vocales familiares no pueden ser cualesquiera españoles. La circular aclaratoria de 26 de noviembre de 1932 excluye a los padres o madres de familia que pertenezcan a Asociaciones confesionales. ¿Se quiere una mayor prueba de persecución de los derechos de un inmenso sector de padres de familia? Porque importa no olvidar aquí que son precisamente los padres de familia católicos legítimamente representados en sus asociaciones profesionales, los que mantienen la mayor parte de la actual enseñanza privada española, toda la cual quedará, si las bases de reforma en cuestión se aprueban, sometida al fallo de los Consejos escolares actuales manejados por los socialistas.

Evidente es, pues, que si la nueva ley de Primera enseñanza quiere afrontar dignamente este asunto de los Consejos escolares, ha de empezar por consignar con lealtad en sus líneas las normas a que ha de obedecer su organización. No con exclusivismos, sino con sana extensión democrática y sin la tendencia a hacerlos sucursales u oficinas del ministerio. Porque no *tendrán jamás eficacia ni permanencia si no se logra interesar en ellos a la opinión, al público, a la masa, a la sociedad entera, en una palabra*. Y mal logrará esto el Poder público, para quien el concurso pedagógico de la sociedad no es sólo necesario, sino fundamental, si empieza por negarle en el control y vigilancia de la enseñanza una representación, por lo menos, paritaria a la suya, con un criterio de equidad y de honradez.

Volviendo, en fin, a las bases de la Primera enseñanza, en los momentos en que finaliza la información pública, insistamos en recalcar los peligros de la tendencia monopolizadora obstinada, que en pro de la enseñanza estatal quieren imprimir nuestros actuales legisladores. Peligrosa porque ha de fracasar sin remedio. Los países de más próspera cultura y régimen docentes son aquellos en que el Estado se mantiene en su puesto tutelar y supletorio de la función pedagógica encomendada a la sociedad. Inglaterra, los Estados Unidos, Holanda, Bélgica...No, no es una fórmula clerical la libertad de enseñanza. Por contraste, los más decadentes y desordenados, aquéllos como Méjico y Rusia, que han pretendido socializar la educación ¡Cómo si la educación, que es la síntesis de alma de la sociedad, pudiera considerarse un humano material, susceptible de ponerse a la disposición del partido que momentáneamente encarne al Estado!.

18.- "¡Marías hay que hacer locuras!"

S. I. BDE de Málaga, año 65. 15 de julio de 1932, núm. 7, págs. 181-184.

Y digo *Marías* y no Romanas, ni Juanas, ni Pepas, sino *Marías de nombre y obras, de corazón y de cabeza, de pies y de manos y de toda su vida para dar y buscar compañía al Divino Abandonado.*

Y digo *locuras*, no de cabeza, que para eso están los manicomios, ni de fantasías, que de esas está el mundo lleno, sino de *corazón*. Si el acto propio del corazón es amar, el propio del de la María es amar con locura o volverse loca de amar.

A estas, a las *locas de corazón* y no a las prudentitas y comodoncitas y temeroncitas que en todo ven una molestia, un peligro, una dificultad, a esas les digo: ¡hay que *hacer*...!; es decir: no planear, ni discursar, ni lamentarse o quejarse, sino *hacer*, y *hacer locuras*.

¿PARA QUÉ?

Para imitar y proseguir la locura de su Hermana mayor María Magdalena en torno del Sepulcro vacío de Jesús. Jesús robado la vuelve loca y la pone a punto de hacer las mayores locuras para recuperarlo. ¿No se merece el Jesús que han robado o traían de robar del alma de los niños el que se vuelvan locas sus Marías y hagan todas las locuras imaginables para que las almas de los niños no pierdan a Jesús o lo recuperen, si lo han perdido?

Yo quisiera poner en esta hoja todo el fuego del corazón loco de María Magdalena buscando a Jesús robado y, más aún, el fuego de amor dolorido de la Madre Inmaculada buscando a Jesús perdido, y toda la fuerza de contagio de todos los apóstoles locos de Jesús para que las Marías que pasaran los ojos por estos renglones perdieran el tino y la cordura y quedaran contagiadas.

¿CÓMO?

Si las locuras tuvieran regla, la única que yo pondría a la del corazón de las Marías sería esta: «que no pase día sin empujar a las almas de los niños hacia Jesús y sin empujar, no es escandaliceis! al Corazón de Jesús hacia las almas de los niños».

Empujad cada día a las almas de los niños a Jesús enseñándoles algo de su Doctrina, mostrándoles algo de sus ejemplos, dándoles algo de su cariño....

Empujad muchas veces al día al Corazón de Jesús hacia los niños orando y mortificándoos, lo más que podáis, por las almas de los niños, metiendo por los ojos de los niños al Jesús de vuestra Comunión con la mansedumbre de vuestra buena cara, la dulzura de vuestras palabras, la generosidad de vuestro corazón y la modestia de vuestra vida.

¿ESTO ES DIFÍCIL?

Para una Pepa o Ramona o Joaquina cualquiera quizás sí, para una *Maria*, no, y si lo es en ocasiones ¡para eso es *Maria*! sin más apellido que este: *loca* por su Jesús!

EJEMPLOS DE LOCURA

1.º—¿Tenéis Catequesis en vuestra Parroquia? Por ser *Marias* no solamente debéis pertenecer a ella, sino ser las primeras en llegar, las más celosas en buscar hasta en sus casas a las niñas, y a los pequeños que no han ido o que podrían ir, en darles cariño y parte muy especial en vuestras oraciones y mortificaciones, en ser las últimas en separarse de ellos, no contentándose con la hora del Catecismo sino llevándolos y acompañándolos a los actos de culto, recepción de sacramentos, visitas al Santísimo, asistencia a la Santa Misa, etc., llevándolos de paseo y aprovechando este para la salud de sus almas y de sus cuerpos....

2.º—¿Porque no ha de haber *Marias* vuestras por amor a Jesús?

Las había y las está habiendo a partir de la expulsión de Jesús de la escuela oficial. Se de no pocas *Marias* que, valiéndose de su título de Maestra que tenían empolvado, o asociándose a alguna que lo tuviera sin polvo y haciendo prodigios de fuerzas, de ingenio para encontrar algunas perrillas para pagar casa y material, de vencimiento de respeto humano y de otras cosas que cuestan mucho, han establecido escuelas de muchas letras, de mucho Catecismo y de mucha piedad.

3.º—¿No tenéis Catequesis o no tenéis posibilidad de asistir a ella o de poner una escuela?... ¿No tenéis en vuestra casa hermanitas, criadas, hijas de vecinos o de porteros...? ¿No encontráis por la calle o en vuestra oficina chiquitos y chiquitas, mendigos...? ¿No hacéis o recibís visitas de amigas...? Pues ¡a dar el doble empujón! ¡Oportuna e inoportunamente!

4.º—¿Que no podéis esto o que esto solo no basta? Acudid a la palabra de papel: por el apostolado de la carta, por la hojita de propaganda, por la revista o el periódico bueno que de vuestras manos pase a las de muchos, poniendo todo vuestro ingenio en buscar suscripciones a estas publicaciones y en rescatarlas a las que no sean netamente católicas....

5.º—Y a este llamaría yo el *caso típico de la María*. Después de hacer de lo que llevo dicho, lo que a cada una sugiera el celo de su amor, yo pido con todo el interés y encarecimiento de que soy capaz y por amor y compasión al Jesús arrojado de la vista y cariño de los niños, que cada *María* ponga todo su empeño natural y sobrenatural en buscarse y formarse otras *tres Marias* de las niñas de su Doctrina, o de su trato. ¡Hay que ir a la formación de grupos selectos y finos! ¡las masas nunca son finas!, ¡hay que ir al apostolado entre semejantes, de las niñas por las niñas, de las pobres por las pobres, de las ricas por las ricas, de las ignorantes por las que lo sean un poco menos que ellas! y yo no conozco modo mejor de formar esos grupos selectos que el hacerlas *Marias*

de verdad. Echad el ojo a las de mejor índole y más talento. Llamadlas aparte, frecuentad su trato, redoblad vuestro interés en instruirías, en atraerlas, en unir las al Corazón vivo del Sagrario hasta hacerles sentir la compasión de su abandono... No parad hasta que se *contuglen* de vuestra locura...

Mis librillos «Partiendo el pan a los pequeñuelos», «Sembrando granos de mostaza» y «Apostolados menudos» os ayudarán en ese encargo.

MARÍAS, VOLVEOS LOCAS

No para dar el primer empujón de apunraros y empezar, que ese lo da cualquiera, sino para empujar hasta el fin, hasta el fin del fracaso, del cansancio, del ridículo, del no gusto, de la rechilla, de la enfermedad, de la ignominia, ¡de la muerte! con tal de que a nuestro alrededor se conozca y se huela a Jesús, se hable de El, se trabaje y se sufra por El. Volveos locas de sentir, pensar y obrar a lo Jesús, de hablar con El y de El, de haceros y ser, en una palabra, Jesús en medio de la familia pagana, de las amigas paganas, de la sociedad pagana que ha perdido la memoria y el sabor y el hambre de lo que debe al *Loco* del Calvario y del Sagrario...

¡Ah! ¡Si Jesús contara en torno de sus Sagrarios con tres *Mariás locas de remate!*

† MANUEL GONZÁLEZ,
Obispo de Málaga.

19.- 9 de diciembre de 1932. Auto reformando el elenco de pecados reservados en esta Diócesis.

BOE de Mondoñedo, año 75, 20 de diciembre de 1932, núm. 24 págs., 221-222.

Nos el Doctor D. Rafael Balanzá y Navarro, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Obispo de Lugo y Administrador Apostólico de Mondoñedo.

Por cuanto, a consecuencia de la actual legislación civil española, que decretó y sostiene el carácter laico de toda enseñanza oficial y por tanto de todas las escuelas nacionales, resulta prácticamente imposible, sin graves perjuicios, tanto a los maestros como a los padres y jefes de familia, el evitar la cooperación a las escuelas laicas y neutras; y, por lo tanto, esta cooperación dejó de revestir las condiciones que para los pecados reservados señala el canon 897 del Código de Derecho Canónico y las fijadas antes en la Instrucción de la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio, de fecha trece de julio de mil novecientos dieciséis; teniendo en cuenta además que la reservación de tal pecado en las presentes circunstancias no sólo no es útil sino que al contrario se haría muy gravosa a muchísimos fieles y sería ocasión de graves inquietudes e intranquilidad espiritual, así para los Confesores como para los penitentes: hemos juzgado oportuno suprimir del elenco de pecados reservados en esta Diócesis de Mondoñedo, que figura en el Auto de veinticuatro de diciembre de mil novecientos dieciséis, dictado por el Excmo, Sr. D. Juan José Solís y Fernández, difunto obispo de esta diócesis (q.s.g.h.), el referido caso de cooperación a escuelas laicas o neutras en las cuatro formas determinadas en el expresado Auto, que obra en esta expediente.

Y, obtenida del Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad en Madrid, a medio de Rescripto fechado el veintidós de octubre último, la facultad requerida, a tenor del canon 893, y de conformidad con el parecer del Ilmo. Cabildo Catedral, a quien hemos oído, y con similares manifestaciones de venerables Párrocos de este Obispado, venimos en suprimir y suprimimos de entre los casos reservados en esta Diócesis la COOPERACIÓN A ESCUELAS LAICAS O NEUTRAS en cualquiera de las formas expresadas en el hasta ahora vigente Auto de reservación, dejando este subsistente en cuanto a los otros tres casos reservados, que son los siguientes: Perjurio en juicio o ante el superior legítimo; homicidio y cooperación directa al mismo; incesto en grado primero y primero con segundo de consanguinidad.

Así lo decretamos y firmamos en Mondoñedo, a nueve de diciembre de mil novecientos treinta y dos.

RAFAEL, Administrador Apostólico,
Por mandato de S.E. Rvmo. el Administrador Apostólico, mi Señor
LIC. JOSÉ SOUTO VIZOSO
Secretario-Canciller

NOTA.- Los señores curas y encargados de parroquias darán a conocer a sus feligreses respectivos la modificación introducida en los reservador diocesanos, explicándoles que al suprimir del elenco de los mismos la cooperación a escuelas laicas o mixtas no significa que haya dejado de ser cosa mala y muy perjudicial para las almas, que todos y especialmente los padres de familia están obligados a evitar en cuanto sea posible: se hace para evitar a muchos fieles graves ocasiones y peligros de incurrir, al menos exteriormente, en tal reservación y fundados temores e inquietudes de conciencia.

20. S. f., "Crónica diocesana."

Revista (v. año 13, 15 de abril de 1932, núm. 7, págs. 129-131).

Los que suscriben, madres y familiares de los alumnos matriculados en las Escuelas nacionales y municipales de la parroquia de Santo Tomé de Freijeiro, a V. S. con todo respecto exponen:

Que juzgando absolutamente imprescindible para la verdadera formación intelectual y moral de sus hijos, la presencia del Divino Crucifijo en las aulas, y como consecuencia las enseñanzas religiosas del Catolicismo que han sostenido y defendido con heroísmo las ejemplares madres que nos han precedido; creyendo además que la verdadera libertad debe ser respetada para que nuestros hijos, corazones de nuestro corazón y almas redimidas como la nuestra, formadas según nuestros deseos, sean en todo momento dignos de Dios, dignos de la Patria y dignos de nuestro amor familiar.

Pedimos con el mayor respeto y con el corazón maternal anhelo, que V. S. interponga su alta representación ante el Señor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para que en las mencionadas escuelas, vuelva de nuevo a ocupar el lugar que tenía la edificadora y amorosa imagen del Crucifijo y en su consecuencia a nuestros hijos se les enseñe los rudimentos de la Doctrina Cristiana.

21. - 15 de enero de 1933. Circular a los Directores de Colegios y Escuelas Católicas de la Diócesis.

BOE de Santiago de Compostela, año 12, 15 de enero de 1933, núm. 2688, págs. 6-10.

Del Sr. Presidente de la Federación de Amigos de la Enseñanza hemos recibido una atenta carta de la que copiamos los siguientes párrafos:

"Las vicisitudes que atraviesa la Iglesia Católica en España, la honda crisis puesta de manifiesto con la revolución y prevista con anterioridad por un grupo de personas, hizo pensar en la conveniencia de que la educación dada por la Iglesia se elevase lo más posible, para que supere siempre a la influida por la Institución Libre.

"Para este objeto se creó la Federación de Amigos de la Enseñanza en Abril del año 30, y la labor desplegada desde aquella fecha ha sido la de aunar voluntades, orientándolas e informándolas en los graves problemas educativos planteados hoy al mundo. Al mismo tiempo surgió la revista "Atenas", aneja a la F. A. E. El lema de la F. A. E. es: "No basta crear Escuelas católicas, hay que formar a los maestros".

"Posteriormente, como medio orientador, se publicaron hojas, folletos y libros. La propaganda escrita realizada por la F. A. E. se cifra, según datos comprobables, en 6.000.000 de hojas, 400.000 folletos y 18.000 libros. Ha enviado en sus dos años y medio de vida 60 notas a la prensa de Madrid y provincias, lo cual supone una difusión en los periódicos equivalente a 12.000.000 de hojas volantes. El archivo especial de recortes de periódicos de España y del Extranjero será, no tardando mucho, el más importante de España. Esto no se creía suficiente, y la F. A. E. organizó en diferentes épocas de su vida cursillos de Pedagogía, Clásicos, Apologética, etc.

"Todo ello sufragado hasta el momento presente por Colegios y Escuelas privadas, especialmente de Religiosos que, con sus cuotas, han logrado que viva la organización. Pero quedan todavía muchas escuelas que se llaman católicas, y que por muchas circunstancias — algunas de ellas sin duda esperan las indicaciones de sus Prelados — no se han inscrito en la F. A. E."

Reiteradas veces en las Circulares que hemos dirigido a nuestro amadísimo clero y diocesanos hemos puesto de relieve la importancia que para el triunfo de nuestra religión y, por consiguiente, para el bienestar de los pueblos, tiene la enseñanza religiosa. No hemos dudado en afirmar que sin instrucción religiosa no será posible grabar en el alma de los hombres los principios que han

de llevarle a la consecución de su felicidad temporal y eterna, ni sabrán nunca librarse de los apetitos desordenados, de sus malos hábitos, de las malas inclinaciones de su naturaleza, que forzosamente han de enturbiar la serenidad de su entendimiento y debilitar el vigor de su voluntad, y hacer así imposible el cumplimiento de los deberes para con Dios, para consigo mismos y para con la sociedad.

Claro es que la gracia de Dios ha realizado los más estupendos prodigios, pero nosotros hemos de argumentar, no esperando cruzados de brazos los milagros de Dios, sino poniendo de nuestra parte todo lo que podamos para corresponder a las gracias de Dios y hacernos dignos de los favores, ordinarios o extraordinarios, que El quiera concedernos. Claro es también que la instrucción a que principalmente Nos referimos es la instrucción catequística, o de la doctrina cristiana, pues sin ella nada valdrán para traer la felicidad y la paz al mundo todos los conocimientos y adelantos en las ciencias profanas; pero hemos de dejar bien sentado que todos los postulados de estas ciencias pueden y deben estar en la más perfecta armonía con los postulados de la doctrina católica, pues nunca una verdad científica puede chocar con una verdad religiosa, ya que ambas han de ser forzosamente reflejo y como desdoblamiento de la única *Verdad por esencia*, de Dios mismo, que no puede admitir contradicción ni en Sí ni en sus criaturas.

De ahí la suma importancia de que dediquemos nuestros mayores desvelos a conseguir que en todos los Centros de enseñanza, tanto elemental como superior, se den todas las disciplinas con sujeción a los principios de la doctrina católica siempre imprescriptibles y con respeto a los supremos e inalienables derechos de la Iglesia.

De ahí también que no podamos menos de mirar con la mayor simpatía a cuantos trabajan por lograr estos fines, por depurar de errores morales los libros de texto, por formar maestros de sólida doctrina científica y religiosa, y por conseguir para los Centros de enseñanza católica los mismos auxilios —o, por lo menos, el mismo respeto— que el Estado dedica a otros centros de enseñanza laica.

Y entre estos paladines de la enseñanza católica tenemos que contar a la asociación "Federación de Amigos de la Enseñanza" cuya labor en esta materia puede apreciarse por los datos que anteriormente se reseñan. Mas como poco o nada valen los esfuerzos aislados en esta época, en que todas las fuerzas «fines» se dirigen estrechamente unidas al logro de sus ideales, tenemos también nosotros necesidad muy urgente de unificar nuestros esfuerzos para lograr el triunfo, o el respeto de la enseñanza religiosa.

Y así, Nos permitimos dirigir un ferviente ruego a todos los buenos católicos, pero especialmente a los *Directores de Colegios y Centros de enseñanza religiosa* para que hagan incluir sus nombres en las listas de la Federación de Amigos de la Enseñanza, no sólo para robustecer esta asociación, que es y será, así lo esperamos, firmísimo baluarte de la instrucción religiosa, sino también para asegurar más provechoso éxito a la labor personal que en este sentido queremos desarrollar.

Para mayor facilidad de todos, hemos ordenado que se publique en este mismo número un modelo de Boletín de inscripción, en el que se detallan también las cuotas que han de abonar los asociados.

Confiadamente esperamos que todos os convencereis de la importancia suma de organizarnos convenientemente para la defensa de nuestra enseñanza religiosa y para que no decaiga, o recobre el esplendor pasado, el espíritu cristiano de nuestras escuelas y centros de enseñanza.

Santiago, 15 de Enero de 1933.

† EL ARZOBISPO.

• • •

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN (ANUALES) CENTROS DE ENSEÑANZA

Centros gratuitos

Cada Centro 10 ptas.

Centros de pago

A) Centros de 1.ª enseñanza (1)

Con menos de 50 alumnos.....	15 ptas.
Con menos de 100 y más de 50	25 "
Con menos de 200 y más de 100.....	40 "
Con más de 200	30 "

B) Todos los demás Centros (2)

Con menos de 100 alumnos y más de 30.....	50 ptas.
Con menos de 200 alumnos y más de 100	100 "
Con más de 200	200 "

(1) Se consideran, en cuanto a las cuotas, como de 1.ª enseñanza, aquellos Centros que, aun teniendo alumnos de 2.ª enseñanza (Bachillerato, Comercio, Normal, etc.), el número de éstos no pase de 30.

(2) Para la fijación de las cuotas de estos Centros, que tengan por lo menos 30 alumnos de 2.ª enseñanza, o asimilada (Bachillerato, Comercio, Normal, etc.), se atenderá la número total de alumnos del Centro.

Particulares

Socios de cuota de	10 ptas.
Socios de cuota de	100 "
Socios vitalicios, por una sola vez	1000 "

* * *

Federación de Amigos de la Enseñanza

Mannet Silvela, 7.-Madrid

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

*El Centro de Enseñanza o el Sr. D....., se suscribe
con la cantidad de..... pesetas, a la Federación de
Amigos de la Enseñanza como socio..... de la misma,
con domicilio en.....* (FIRMA DEL INTERESADO)

(Cópiese este Boletín).

22.- 20 de febrero de 1933. Obra Diocesana de las Escuelas Católicas. Advertencias y Mandamientos importantes sobre Escuelas Católicas.

BOE de Vitoria, año 9, 1 de marzo de 1933, núm. 5, págs. 39.

Oración por las Escuelas Católicas

Señor nuestro Jesucristo, único Maestro de hombres y de pueblos, que con tu divino ejemplo has enseñado a tu Iglesia a atraer, albergar y cuidar a los niños en su seno, con maternal afecto: bendice con tus celestiales gracias nuestras escuelas, para que esta piadosa generación, siguiendo a Ti, camino, verdad y vida, se vea libre de la ciencia falaz del mundo y crezca como corona de tu Iglesia santa y ornamento de la Patria y llegue segura a contemplar con sus Angeles la faz de tu Padre celestial.

Que vives y reinas por los siglos de los siglos.—Amén.

(Indulg. de 300 días. *S. Pen. Ap.* 17 mayo 1927).

23. "El espíritu republicano, vigoroso propulsor de la instrucción pública".

"El Sol", 14 de abril de 1933.

PRIMERA ENSEÑANZA

UNA OBRA EXTRAORDINARIA

INTERESES POR LA LABOR PÚBLICA DE LA REPÚBLICA

La iniciativa de EL SOL no puede ser mas oportuna. Tiene ustedes razón. Conviene que se entere el país de todo cuanto se ha hecho en estos dos años de República. Los extranjeros siguen con gran interés nuestra obra y por las publicaciones que llegan hasta nosotros demuestran que se documentan seriamente. Saben de nosotros lo que todavía ignoran no pocos españoles.

Esa documentación la han adquirido por diversos conductos. Nos ha visitado individualmente multitud de profesores y políticos de distintos países. Colectivamente son varias las caravanas de maestros, sobre todo franceses, que han recorrido España. Ahora mismo se encuentra entre nosotros un grupo de ciento cincuenta profesores franceses. Como está igualmente una Delegación belga. También nos había anunciado su viaje una caravana de profesores y maestros alemanes. No creo que la realicen. Todas estas visitas escriben después sus impresiones de viaje en los periódicos, sobre todo profesionales, contribuyendo a formar el ambiente de curiosidad, interés y simpatía que existe fuera de España en torno a nuestra labor pedagógica. De ese interés me he dado cuenta personalmente en las conferencias que he pronunciado en Burdeos, Niza, París y Bruselas ante públicos bien heterogéneos. Desgraciadamente, no pude aceptar la invitación que me hizo el Secretariado Profesional Internacional para pronunciar una serie de conferencias divulgando nuestra labor pedagógica en Berlín, Hamburgo, Viena y Ginebra. Ginebra, además, ha dado a conocer extensamente nuestra obra. El Bureau International d'Education ha publicado en varios idiomas extractos de nuestras disposiciones más importantes.

En España no tenemos todavía una publicación que recoja ordenadamente toda nuestra obra. Ahora precisamente se inicia esa labor. Acaba de aparecer el primer número del "Boletín de Educación", que edita el ministerio, donde se expone sistemáticamente lo que ha hecho la República en orden a la primera enseñanza.

LAS ESCUELAS QUE SE HAN CREADO

Sin embargo, en este resumen que va a publicar EL SOL pueden advertirse las líneas generales, la arquitectura de lo hecho. Nosotros llegamos al ministerio el 16 de abril de 1931. Nos hicimos cargo de la herencia que nos había legado la Monarquía. ¡Penosa herencia!. La mitad de los españoles sin saber leer ni escribir. Millón y medio de niños en la calle sin escuela. La república tenía trazado su programa inmediato. La Monarquía podía vivir con la ignorancia del pueblo. La República, por el contrario, para vivir y progresar, necesitaban acabar con esa ignorancia. Había que sembrar escuelas por todas partes. Había que salvar a los españoles condenados a ser súbditos de un Monarquía absoluta y transformar su mentalidad hasta convertirlos en ciudadanos conscientes de una República democrática.

Hicimos rápidamente una estadística para saber cuántas escuelas funcionaban y cuántas hacía falta crear. La estadística no podía ser más dura. Funcionaban 25.716. Pero si se quería cumplir el mandato constitucional ofreciendo escuelas a todos los niños de edad escolar, necesitaba abrir la República inmediatamente 51.151 escuelas más. Ése es el déficit que nos legó la Monarquía.

La República necesitaba crear escuelas, sembrarlas a voleo por todo el país. En el presupuesto que heredamos se preveía la posibilidad de crear 1.000 escuelas al lado de las 27.000 que hacían falta. El Ministerio trazó su plan. En cinco años, podía y debía dotarse a España de esas 27.000 escuelas. Así quedó establecido en el decreto de 23 de junio de 1931. Y se crearon inmediatamente 7.000 escuelas. Y más tarde, en el presupuesto para 1932 -aquel presupuesto que se llamó con justa causa de liquidación- se crearon 2.580 escuelas más. Y todas ellas funcionan ya. La República, pues, en año y medio creó 9.580 clases. En año y medio. Justamente lo que costaba a la Monarquía veinte años. Es decir, lo que hacía durante veinte años la Monarquía lo ha hecho la República en año y medio. Eso da idea del ritmo que se ha impuesto a la vida pedagógica de España.

Cada escuela que se abre, cada escuela que se crea, es, en realidad, un contrato que se establece entre el Estado y el Ayuntamiento correspondiente. El Estado proporciona los maestros y los paga. El Ayuntamiento proporciona el local escuela, el material y mobiliario, más la indemnización por casa habitación del maestro. A pesar del estado ruinoso de las Haciendas municipales, de las deudas y de las hipotecas heredadas de la Dictadura, los Ayuntamientos todos han rivalizado en su afán de tener escuela. El pueblo anhelaba escuelas. Y las sigue anhelando. Tan es así, que las cuatro mil que figuran en los actuales presupuestos para funcionar desde 1 de septiembre serán insuficientes. Desde luego.

Aunque el esfuerzo de todas las provincias ha sido y sigue siendo muy grande, hay entre ellas notables diferencias. Así, quince provincias han

creado cada una de ellas más de 100. Once, más de 200. Cuatro, más de 300. Valencia, más de 400. Barcelona y Madrid, alrededor de 500. Eso, las provincias; que las ciudades ofrecen espectáculos muy interesantes. Hay ciudad de más de 16.000 habitantes que sólo tenía una escuela nacional. Hoy tiene veinte. Y Madrid, que tenía 500 maestros nacionales, al advenimiento de la República, hoy tiene 893. Es decir, en los años de República ha creado 393 clases.

MEJORAS ECONÓMICAS

Si analizásemos las creaciones, se vería que se ha fomentado grandemente la escuela graduada y la clase de párvulos. Pero se vería sobre todo que no se han creado en la categoría de entrada. Ello ha permitido, con las obligaciones impuestas por las exigencias de nuestra situación económica, distribuir las creaciones entre las distintas categorías y mejorar el salario de los maestros. Poco, sin duda. Y mucho menos de lo que era propósito del ministerio. De todas formas, la República puede ofrecer este balance: las 9.580 plazas de nueva creación provocaron 20.115 ascensos. Con la creación de la categoría de 9.000 pesetas y la supresión de la de 3.500 se han provocado igualmente 4.807 ascensos. Y si se tiene en cuenta que, con la supresión de los sueldos de 2.000 y 2.500 pesetas que tenían 6.333 maestros del segundo escalafón, se han provocado otros tantos ascensos, nos encontraremos que en total, por actos de la República, han ascendido 31.755 maestros. De ellos han mejorado económicamente 31.755. Es decir, el 86,5 por 100. Ciertamente algunos han ascendido sólo 500 pesetas. Pero poco o mucho, lo que han ascendido se lo deben a la República. Ha tenido que venir la República para que esa pequeña justicia haya podido ser.

En este sentido podría añadirse para completar el cuadro que los maestros interinos, que antes cobraban 2.000 pesetas, cobran ahora 3.000. Y saben que sus nombramientos no dependen del capricho del favor o de la presión de nadie. Conviene volver la vista atrás de cuando en cuando para tener idea exacta del camino andado.

UN HOGAR INFANTIL

Estos ascensos han tenido una gran virtud. Como la diferencia del sueldo del primer mes de ascenso se entrega al Patronato de Huérfanos del Magisterio, los ingresos que han tenido esta caja desde el advenimiento de la República por estos motivos son considerables. Más de dos millones. ¡Cómo que hemos podido planear una nueva vida a tan interesante institución! Ya hemos adquirido el -el viernes último firmamos la escritura- por 800.000 pesetas un magnífico hotel en el paseo del Cisne para iniciar el primer Hogar Infantil. Una casa donde vivirán vida de familia -

una gran familia- los huermanitos del Magisterio. Aspiramos a que sea una institución modelo.

LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES

Cada escuela que se crea lleva consigo no pocos problemas. Fundamentalmente dos: el del edificio y el del maestro. Los dos han sido estudiados y atendidos por la República. Cuando nos hicimos cargo del ministerio nos encontramos con un presupuesto que dedicaba ocho millones y medio a construcciones escolares. De esa cantidad habían gastado ya 3.700.000 pesetas. Podíamos, pues, disponer de 4.309.000. Pero como se reservaba un millón para las construcciones de Madrid, decidimos remontar la construcción con los 3.300.000 pesetas restantes. Unas veces construyó directamente el Estado con aportación municipal. Otras veces construyeron los Ayuntamientos con subvención del Estado. Al presupuesto de 1932 no pudimos llevar más que las cantidades necesarias para continuar las obras subastadas. Ni un céntimo para nuevas construcciones escolares. Todo quedaba supeditado a una operación financiera que había estudiado el Gobierno. Es claro, había que construir muchas escuelas. Muchas. No había posibilidad de atender debidamente una empresa extraordinaria como ésa con recursos ordinarios. Por eso se presentó a las Cortes el proyecto de ley para concertar un empréstito de cuatrocientos millones para construcciones escolares. El Parlamento votó el empréstito de Cultura. Es la ley de 16 de septiembre de 1930. Por ella, La República podrá gastar en ocho años esos cuatrocientos millones. Y si calculamos en doscientos lo que aporten lo Ayuntamientos tendremos que van a dedicarse seiscientos millones en construcciones escolares. No hay país alguno que pueda ofrecer un momento de su historia en el que se afronten estos problemas con tanta generosidad como decisión.

Con los medios ordinarios del presupuesto de 1931 y de 1932, es decir, antes de poder disponer de las Obligaciones de Cultura, la República subastó la construcción de 199 secciones o clases -sin contar Madrid, naturalmente- y aprobó la subvención correspondiente a 1.132 clases o secciones de construcción municipal. Es decir, que desde el 14 de abril hasta el 31 de septiembre de 1932 la República ha construido, está construyendo o ayuda a construir 1.331 secciones o clases. Y si añadimos las 285 secciones construidas en Madrid de que hablaré en seguida, tendremos 1.616 secciones o clases para tener una idea de lo que eso significa en la historia de España, basta saber este dato: la Monarquía desde 1900 hasta 1921, subvencionó la construcción de 216 edificios. Desde 1921 hasta la proclamación de la República construyó o subvencionó la construcción de 2.036 clases. Ésa es la obra de treinta años de Monarquía. La República, en cambio, en menos de dos años, 1.616 secciones. Y sin contar la Normal de Cáceres y Cuenca, en construcción. Ni lo gastado para terminar las de Burgos, Huesca, Granada y Toledo. Eso es lo hecho

con escasos recursos. Ahora, con las "Obligaciones de Cultura", hemos impreso nuevo impulso a la construcción.

LOS GRUPOS DE MADRID

Las construcciones de Madrid merecen capítulo aparte. El Ayuntamiento contribuye con los solares y el 50 por 100 de la construcción. El Estado paga el otro 50 por 100. Ese concierto data de 1922. Entonces hicieron los seis primeros grandes grupos que tiene Madrid: Jaime Vera, Pardo Bazán, Joaquín Costa, Concepción Arenal, Pérez Galdós y Menéndez Pelayo. Tardaron en terminarse seis años. A mí me parecía y me parece un esfuerzo magnífico. Un timbre de gloria. Sin embargo, la República, en dos años, ha construido en Madrid 18 grupos escolares. Cinco los inauguró el 11 de febrero. Siete los inaugurará hoy, 14 de abril. Los otros seis se inaugurarán el 1 de septiembre. La Monarquía, en seis años, construyó en Madrid seis grupos. La República, 18. Ése es el plan de 1931. Pero es que, además, se está realizando el plan de 1932, que consiste en la reforma y ampliación de diez grupos antiguos. Y además ha sido aprobado el plan de 1933, que abarca la construcción de 21 grupos más y la reforma de otros 13. De ese plan, ya está en la "Gaceta" el anuncio de la subasta del primer grupo, el de la Granja del Carmen.

La República, como se ve, ha prestado a la construcción escolar su máxima atención. Ha establecido conciertos con Álava, Palma de Mallorca y Bilbao. Los concertará inmediatamente con Oviedo, Alicante, Zaragoza y Granada. Ha modificado el decreto de construcciones y las normas técnicas. Y cuando quiere honrar la memoria de algún patricio insigne, no encuentra mejor monumento que erigirle un grupo escolar. A Pablo Iglesias, en El Ferrol. A Giner de los Ríos, en Ronda. A Azcárate, en León. A Ruiz Zorrilla, en Burgo de Osma. A Salmerón, en Alhama. Y a Galán y García Hernández, es decir, al "Doce de diciembre", en Jaca...

LA FORMACIÓN DEL MAGISTERIO

Hasta aquí hemos visto lo hecho con las construcciones. El edificio de la escuela. Veamos ahora lo hecho con el maestro. En orden a los maestros, se nos planteaban tres problemas. De un lado, teníamos que preocuparnos de los nuevos maestros, de los maestros para el futuro. No titubeamos un sólo momento: reformamos los estudios del Magisterio. Es el decreto de 29 de septiembre de 1931. Fusionamos las escuelas Normales. Establecimos la coeducación. Convertimos las Normales en centros de carácter profesional auténtico. Limitamos los ingresos. Aseguramos la educación al terminar los estudios. Estamos ahora viviendo el ensayo. Son los momentos de adaptación de toda reforma profunda. En el Extranjero se ha comentado mucho nuestra reforma. Entre nosotros, por de pronto, ya se advierte la influencia de la reforma. La vida de las Normales se ha

elevado. Profesores y alumnos trabajan con un nuevo sentido de responsabilidad. Dentro de dos años, cuando salga la primera promoción de la reforma, podrá enjuiciarse su eficacia. También se ha mejorado la situación económica del profesorado de las Normales. Poco. Pero con las 33 jubilaciones y con los aumentos del presupuesto han ascendido casi todos, habiéndose suprimido la categoría de 4.000.

Ya tenemos, pues, resuelto lo de los maestros para el futuro. Al mismo tiempo teníamos que seleccionar los maestros que teniendo su título deseaban ingresar en los escalafones del Estado. Como no estábamos satisfechos de la preparación que en general habían recibido en las Normales, ni nos parecía bien el sistema de las oposiciones clásicas, pensamos en un procedimiento de selección que fuese al mismo tiempo de perfeccionamiento. Son los cursillos de selección. Por ese procedimiento, el aspirante a maestro asiste a conferencias, presencia lecciones de maestros modelo, practica durante un mes en una escuela, se pone en contacto con la Universidad... La República ha seleccionado ya 6.000 nuevos maestros.

Importancia tiene preparar maestros para el futuro. Importancia tiene igualmente seleccionar entre los titulados los mejores. Pero no tiene menos importancia el preocuparse de los maestros que están ya en activo servicio. Se trata de maestros formados durante la Monarquía. Que han sufrido los vejámenes de rigor. Que la inmensa mayoría de ellos se había sepultado en las aldeas y, salvo los que tuvieron temple de héroes, acabaron siendo víctimas del ambiente e instrumento del caciquismo. La República se ha preocupado de este problema. Ha organizado unos cursos en las Normales para que acudan los maestros rurales a pasar quince días en aquellas aulas que creían perdidas para siempre. La Normal y la Inspección, con la ayuda de los maestros más prestigiosos, se encargan de renovar la formación espiritual y profesional de aquellos maestros que volverán a su tarea con no poco optimismo en el corazón. Al mismo tiempo y, mientras se organizaban estos cursos, hemos fomentado las Semanas pedagógicas, que se han celebrado en casi todas las provincias. Los maestros se reúnen, pasan juntos una semana, discuten cuestiones pedagógicas, hacen excursiones, ven trabajar a los mejores maestros españoles. El curso pasado se movilizaron 15.000 maestros. Hasta hubo un tren especial. Este año, sólo durante la semana última, se han movilizado unos 5.000. Indudablemente, hay en el Magisterio un gran deseo de trabajar más y mejor, un afán de superación. Pronto se dejará de sentir la escuela de la República en esta escuela que está renovándose profundamente.

En este mismo sentido, conviene completar el panorama de lo que ha hecho la República en beneficio del personal docente para el perfeccionamiento de su valer profesional. Ha creado la Sección de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, abriendo de ese modo a los maestros las aulas universitarias. Ha celebrado en Madrid un cursillo para profesores de la Escuela Normal. Concurrieron 118. Duró once días. Se

instalaron en la Residencia de Estudiantes. Dieron clases las personas más prestigiosas de nuestras Universidades, Centro de Estudios Históricos, Laboratorio de Matemáticas, Fundación Rockefeller, etc. También se ha celebrado un reunión de inspectores. Acudieron cincuenta. Tanto la de inspectores como la de normales, han sido sufragadas íntegramente por el ministerio.

PARA PROTEGER LA ESCUELA

Por lo que puede verse por lo que acabo de decir, la República abrió escuelas, se preocupó de los edificios y preparó maestros. Pero, al mismo tiempo, había que pensar en la protección de esas escuelas creadas y de esos maestros. Por eso se organizó la Inspección Profesional de Primera Enseñanza. Es el decreto de 2 de diciembre. Renuncio a explicar todo lo que hay de innovador en el mismo. Me limito a decir que se acusa fundamentalmente el carácter técnico de la Inspección, se crea la categoría de Inspectores maestros y se establece la Inspección central para las Normales y la Inspección de Primera Enseñanza. La República ha creado 110 plazas de inspectores. En el actual presupuesto se crean otras 65. Aunque modestamente, también han ascendido los inspectores. Se ha suprimido la categoría de 4.000 pesetas. Con ese mismo deseo de ayudar a la escuela y al maestro, creamos los Consejos de protección escolar. Consejos escolares, locales, provinciales y universitarios. Tampoco pretendo explicar ahora el funcionamiento y atribuciones de dichos Consejos. Los dos años que llevan de vida y la labor realizada, son el mejor exponente de lo que han significado y significan en la vida pedagógica de la República. Ahora sólo faltaría para valorar su eficacia que se acordaran de lo que eran las famosas Juntas locales y provinciales de Primera Enseñanza. La comparación sería edificante.

Todavía pueden señalarse en esta misma dirección otras iniciativas: la reunión de maestros en el palacio de La Granja durante el verano de 1931 y la reunión de maestros en la residencia que fue de jesuitas en Celorio durante el verano de 1932. Y para este verano ya están tomados los acuerdos y libradas las cantidades para asegurar la presencia de profesores de Normal, inspectores y maestros en la Universidad Internacional de Santander y en la Semana pedagógica Internacional que allí se celebrará en el mes de agosto, después de terminar sus sesiones el Congreso de la Federación Internacional de Asociaciones de Maestros (F.I.A.I.). Pero lo que más influencia deja en la escuela, en el maestro y en el pueblo mismo, es la labor de las Misiones Pedagógicas. De su teatro, de sus bibliotecas, de sus "cines", gramófonos, Museo de arte, coros, etc., no es menester hablar, pues han sido divulgados grandemente.

LA ESCUELA POR DENTRO

Para completar el panorama de lo hecho, nos hace falta saber lo que se ha hecho dentro de la escuela. A nosotros nos interesa mucho abrir escuelas y más escuelas. Pero nos interesa más la calidad de esas escuelas. Queremos que sean buenas. Buenas por el edificio -después de todo, el edificio es el revestimiento de una idea-, buenas por el mobiliario, que debe responder igualmente a la idea que de la escuela se tenga; buena, sobre todo, por el espíritu que anime lo que en ella se haga. La República tiene su escuela. Es la escuela que ha quedado incrustada en el artículo 48 de la Constitución. Ese artículo es todo un programa pedagógico. Lo habíamos anticipado con decretos, órdenes y circulares anteriores a la Constitución. Lo hemos explicado, sobre todo, en la circular de esta Dirección general de 12 de enero de 1933. En la Constitución y en cuántas disposiciones se han dado queda con toda claridad el carácter de la nueva escuela nacional: Respeto absoluto a la conciencia del niño. Laicismo en la enseñanza. Hacer del trabajo el eje de toda la actividad metodológica de la escuela. Inspirar ese hacer en ideales de solidaridad humana.

¿Necesitaré decirte que hemos dado un gran impulso a las cantinas, a las colonias, a las becas, a los roperos, al "cine", a la "radio" y a las clases de adultos? Fijese en las cifras: en 1931 había 250.000 pesetas para colonias escolares; en 1932, 400.000; en 1933, 600.000; en 1931, 900.000 pesetas para cantinas y roperos; en 1932, 500.000 para cantinas y 100.000 para roperos; en 1933, 100.000 para roperos y 2.000.000 para cantinas; 400.000 para "cine" y "radio". En cuanto a los adultos, hemos hecho este curso el ensayo de admitir alumnas. El ensayo no ha podido ser más feliz. En los pueblos y en las ciudades han acudido multitud de muchachas a las clases nocturnas. Casi más que hombres. En fin, con lo dicho se puede dar idea de algo de lo que se ha hecho en primera enseñanza. Y no recordamos el decreto acerca del bilingüismo, ni la instalación de los niños ciegos en Chamartín y sordomudos en Valdelatas, ni la Escuela de Anormales. Ni, sobre todo, le hablo de lo que no se ve, de lo que no transcende. De las Comisiones de vejados, de la del Estatuto del Magisterio, de la de revisión de libros escolares. Quede ahí nuestro balance. La República, a los dos años de existencia, puede ofrecer, en orden a la primera enseñanza, estas cifras: creación de 9.580 plazas de maestros, creación de 4.000 más para funcionar en 1 de septiembre, creación de la categoría de 9.000 pesetas, supresión de la de 3.500, elevar a 3.000 pesetas a todos lo del segundo escalafón, 31.755 ascensos, sueldo de 3.000 pesetas para los interinos, pase al primer escalafón de los del segundo, construcción de 18 grandes grupos en Madrid, de 1.616 secciones en toda España, reforma de las Normales, reforma de la Inspección, creación de 175 plazas, creación de los inspectores maestros, de la Inspección central y de cursillos de selección. Antes, una sola de estas cosas, cualquiera de ellas, suponía toda la labor del paso de un ministro. Ahora, la República hace todo eso en dos años. ¡Y lo que queda todavía por hacer!...

RODOLFO LLOPIS

SEGUNDA ENSEÑANZA

LA CREACIÓN DE NUEVOS INSTITUTOS

No tardó la República en concertar su atención en el espinoso problema de la segunda enseñanza. Ante todo -en agosto de 1931- se preocupó de la creación de nuevos Institutos y comenzó por convertir en nacionales los Institutos femeninos locales de Madrid y Barcelona, llamados Infanta Beatriz e Infanta María Cristina, que recibieron la denominación de Cervantes y Maragall. Poco después -en octubre del mismo año- se facultó a la Generalidad de Cataluña para organizar en Barcelona, con el carácter de ensayo pedagógico, un Instituto Escuela.

Al mismo tiempo se creaban los Institutos de segunda enseñanza en Santa Cruz de la Palma, Linares, Cuevas del Almanzora, Elche, Béjar, Yecla, Ceuta, Torrelavega, Vigo, Lueca, Jaca, Melilla, Orihuela, Villafranca de los Barros, Tudela, Gijón, Valladolid y Zaragoza. En Madrid se crearon tres: uno en Chamartín, con el de nombre Antonio de Nebrija, organizado como Instituto modelo y con un gran internado añadido con posibles mejoras al que, encomendado a los jesuitas, venía allí funcionando; otro en el segundo piso del edificio de Areneros, bajo el nombre de Calderón de la Barca y otro denominado Velázquez, en la calle del mismo nombre. También se creó un Instituto Escuela en cada uno de los extinguidos colegios de San José, en Valencia y de Villasis, en Sevilla.

ESCUELAS PREPARATORIAS

El Instituto Escuela de Madrid fue creado por la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, a la cual se debe gran parte del fermento liberal y renovador que hizo posible la República. Penosamente en pleno régimen monárquico desarrollándose, entre silencios y desdenes, cuando no en medio de la más clara hostilidad, siempre alentada por los espíritus verdaderamente robustos del país. Ella fue madurando y ofreciendo sus normas, puesto que fue concebida como institución ejemplar para ensayos y reformas en la segunda enseñanza. Y una de sus innovaciones más fáciles fue precisamente la que su nombre indica: un Instituto Escuela; es, a saber, una organización en la cual la segunda enseñanza se ofreciese sin solución de continuidad, como un desarrollo complementario de la primera enseñanza. Así, el niño recibe, en una marcha progresiva, toda la preparación general y humana que ha de capacitarlo para los comienzos de su cultivo profesional, o en todo caso, para su más ágil actuación en la vida social y ciudadana.

Esponáneamente, ante muchos Institutos nacionales, decididos a imitar el ejemplo de Instituto Escuela madrileño, pidieron al ministerio de Instrucción pública se estableciesen en las provincias respectivas escuelas preparatorias que pudiesen proporcionar una enseñanza primaria conec-

tada con la que más tarde había de recibir en los Institutos el alumno. La República ha fomentado la creación de estas escuelas que, por otra parte, han de contribuir a resolver el problema de la instrucción primaria. Si bien se ha procurado no romper en ningún sentido la unidad de la escuela nacional. Manteniendo esta unidad con el sistema de becas, único por hoy utilizable, se aspira a instaurar en lo posible el sistema de la escuela única.

Hasta el momento existen escuelas preparatorias -o al menos secciones- en los institutos de Zamora, Jerez de la Frontera, Valladolid, Cádiz, Pontevedra, Manresa, Vigo, Cáceres, Jaén, Pamplona, Huesca, Ciudad Real, Zaragoza, Ceuta, Baeza, León, Murcia, Calahorra, Lorca, Avilés, Talavera de la Reina, Madridejos, Ribadeo, Ciudad Rodrigo, Antequera, Lugo, Baza y Cangas de Onís. También existen en el Instituto-Escuela de Sevilla, en el de Valencia y en el Instituto local de Peñaroya.

INTERNADOS

Al instaurarse la República sólo había, adscrito a Institutos de segunda enseñanza, dos internados: uno en Córdoba, y otro, en Cabra. Y ambos procedían de una fundación particular, porque la Monarquía había abandonado totalmente esta función, de tan sumo interés, a los grandes establecimientos de las Ordenes religiosas, muy especialmente a los escolapios y jesuitas. La República, ya desde sus comienzos, estimuló la creación de internados en los Institutos. Por un decreto se les autorizó para crearlos bajo las garantías de apoyo y protección de la República. La incautación de los bienes de la disuelta Compañía de Jesús viene facilitando al Gobierno la instalación en las principales regiones españolas de nuevos y amplios internados. Naturalmente, fue preciso dotarlos de material moderno de que en gran parte carecían, aún los de construcción más reciente, como consecuencia de arcaico sentido que de la educación tenían los anteriores poseedores. Un nuevo espíritu social y educativo se filtró con estos internados, de acuerdo con el ritmo general de las demás instituciones republicanas.

El Estado atendió las subvenciones a los siguientes internados: El Palo (Málaga) y los de Albacete, León, Ribadeo, Las Palmas, Calahorra, Cabra, Córdoba, La Coruña, Gijón, Vigo, Jerez, Lorca, Zaragoza, Orihuela, Salamanca y Valladolid. También atendió al de Antonio Nebrija (Madrid), al Instituto Escuela de Sevilla y al de Valencia.

COLEGIOS SUBVENCIONADOS

Reconoce la República que los institutos creados aún resultan insuficientes para atender a la afluencia escolar, hoy incrementada tanto por el extraordinario aumento de escuelas primarias como por la creación de

becas que permiten seguir la segunda enseñanza a nuevos alumnos de situación económica modesta pero de capacidad intelectual suficiente. Así se van afirmando las bases de una futura selección. Se exige además, para ingresar en las Escuelas Normales, el previo estudio del bachillerato, puesto que aquéllas sólo atenderán a la formación profesional del maestro y no a su cultura general. De esta cultura ha de ser fuente única el Instituto.

No se aventuró la República a crear Institutos en ciudades de población escolar insuficiente, faltas de las condiciones más necesarias al complejo funcionamiento de estos centros educativos. Pero en pueblos de alguna importancia, donde los Ayuntamientos habían creado colegios municipales, el Estado fijó su atención y acudió a estimular iniciativas y a prestar carácter oficial a estos centros. Se les enviaron dos profesores: uno que actuaría de director y otro de secretario del colegio. Y al calor de este decidido apoyo oficial van apareciendo cada día nuevos colegios subvencionados. Hasta hoy funcionan los de Mieres, Plasencia, Arévalo, Peñaranda de Bracamonte, Olot (Gerona), Mora, Puertollano, Guadix, Reinosa, Caspe, Irún, Játiba, Gandía. Últimamente se han creado en Andújar (Jaén), Betanzos (La Coruña), Túy (Pontevedra), Lalía (Pontevedra), Cangas de Narcea (Oviedo), Sama de Langreo (Oviedo), Caravaca (Murcia). En Septiembre de 1981 se publicó un decreto facultando a los Ayuntamientos que lo solicitasen para establecer -por vía de ensayo y a título profesional- colegios de segunda enseñanza subvencionados por el Estado.

LOS NUEVOS PROFESORES

Estaban desnutridos los claustros de profesores de Instituto. Durante la dictadura no se había atendido a proveer numerosas vacantes. La enseñanza estaba en manos de auxiliares, que no podían atender a la falta en creciente de los profesores. Muchos de estos además, por su cultura e influjo en las masas de electores, fueron llevados a las Cortes constituyentes, viéndose obligados a abandonar sus deberes profesionales. Para lograr que los institutos pudiesen inaugurar sus cursos normalmente, a comienzos de octubre, y con personal ya en gran parte renovado, hubo que solicitar del profesorado un plus de energías, en pleno verano y en pleno y legítimo descanso, con objeto de formar los Tribunales de oposiciones.

Contra todo augurio pesimista, también en esto logró la República su propósito. Se llevó a cabo la mayor parte de las oposiciones, las restantes se están realizando ya en plena normalidad, con el ritmo ordinario. Han actuado once Tribunales de oposiciones y siguen actuando cuatro. Se han provisto noventa y seis cátedras, y se proveerán cincuenta y siete por los Tribunales que actualmente se organizan.

INSPECCIÓN

La creación de nuevos centros y aún de nuevos tipos de segunda enseñanza, la multiplicación de los internados, la renovación de gran parte de profesores, la aplicación de reformas, la renovación, en fin, del espíritu, de las normas, de la disciplina y de la *orientación general de la segunda enseñanza*, hacían necesario un órgano central que desde el ministerio de Instrucción pública pudiera atender a la inspección de todos los establecimientos de segunda enseñanza. Era preciso establecer entre todos ellos la debida conexión, recoger sus aspiraciones y atender a sus necesidades, vigilar y estimular el desenvolvimiento de los órganos e instituciones recién nacidos.

Por ello, a fin de diciembre del año último se creó la Inspección general de Segunda Enseñanza, que depende directamente de la Subsecretaría.

- 24.- 13 de julio de 1933. Nunciatura Apostólica de España. Carta Circular transmitiendo la contestación de la S. Congregación del Concilio sobre los datos recibidos de las catequesis parroquiales e insistiendo en la necesidad de la Cofradía de la Doctrina Cristiana en todas las parroquias.

Documental, nua. 19, 1933, págs. 154-155.

Madrid, 13 de julio de 1933.

Excelentísimo señor y querido hermano:

El Emmo. Sr. Cardenal Prefecto de la S. C. del Concilio ha tenido a bien comunicar a esta Nunciatura, con expreso encargo de que la transmita a los Rvdmos. Prelados españoles, las impresiones y observaciones que a aquella Santa Congregación ha sugerido la lectura de las relaciones enviadas por el Episcopado español sobre la enseñanza del Catecismo en sus respectivas diócesis.

Cumpliendo por mi parte con mucho gusto dicho honroso encargo, me complace en transmitir a V. E. Rvdma. copia literal de aquellas impresiones, verdaderamente gratas y alentadoras, y de las observaciones muy oportunas que hace en su carta el Eminentísimo señor Cardenal Prefecto.

«De las relaciones acerca de la enseñanza catequística, dice la mencionada carta, enviadas por los Excelentísimos Ordinarios de esa Nación, es consolador destacar la diligencia con que ha sido estudiado por ese Episcopado el problema catequístico, para hacer cada vez más eficaz la instrucción religiosa del pueblo.

«Ni siempre, ni en todas las diócesis, ha habido por parte de los fieles la correspondencia que fuera de desear, como lo demuestra el porcentaje, a veces mínimo, de los niños que frecuentan el catecismo parroquial.

«Obsérvase ahora, sin embargo, un saludable despertar de la actividad catequística en orden a conseguir que reflorezca la escuela parroquial de la doctrina cristiana, obra tanto más necesaria en el momento presente cuanto que se ha suprimido de la escuela pública la enseñanza de la religión.

«Será, por consiguiente, necesario que, en conformidad con la norma del canon 711, párrafo 2.º, del Código de Derecho Canónico, se funde en todas las parroquias la Cofradía de la Doctrina Cristiana, la cual coordine y promueva toda la instrucción que debe darse a los niños, como a los adultos, dentro del ámbito de la parroquia.

«Muy oportunamente se ha constituido en algunas diócesis, dentro de la Curia Episcopal, un Secretariado que vigile especialmente la enseñanza catequística que se da en las parroquias».

Al tener el honor de transmitir a V. E. Rvdma. las impresiones y deseos de la S. Congregación, cúpleme felicitarle cordialmente por la parte que le toca en la buena impresión producida a la S. Congregación, al mismo tiempo que me complace en reiterarle con sentimientos de alta estima y aprecio de V. E. Rvdma. a. y s. s. y a. h.,

† FEDERICO, A. DE LEPANTO, N. A.

Szmo. Sr. Obispo de...

25. - 29 de octubre de 1933. Carta Pastoral: El rumbo de la escuela pública y nuestros deberes.

BOE de Palencia, año 83, 1 de noviembre de 1933, núm. 21, págs. 585-619.

NOS EL DOCTOR DON AGUSTIN PARRADO Y GARCIA
POR LA GRACIA DE DIOS Y DE LA SANTA SEDE
APOSTÓLICA OBISPO DE PALENCIA.

AL VENERABLE CLERO Y AMADOS FIELES DEL OBISPADO.

SALUD Y PAZ EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Venerables Hermanos y amados Hijos:

A los que tenemos el cuidado de las almas una de las cosas que en estas horas tristes nos está produciendo más honda pena, es el ver la dirección que desde el advenimiento del nuevo régimen se ha dado a la escuela pública en España, y lo poco que eficazmente se ha hecho por parte de los padres de familia para cambiar esa dirección. Con ser tanto lo que se ha escrito y hablado acerca de esto, parece que muchos no se han percatado todavía del enorme atropello que por medio de la escuela se quiere consumir contra el derecho sagrado, inalienable e imprescriptible de la familia para dirigir la enseñanza y la educación de los hijos. Creemos que si los padres se hubiesen dado cuenta de lo que significa el sistema de «escuela única» y del término en que inevitable y rápidamente desemboca, tiempo ha hubiera resonado en toda España una ingente y arrolladora protesta, obligando a cambiar el rumbo.

LOS CATÓLICOS NO TIENEN EXCUSA

La Iglesia, guardadora integérrima e incomparable de la dignidad y de los derechos naturales del hombre, siempre y por todos los ámbitos de su vida diecinueve veces secular, ha propagado y divulgado este derecho de la preeminencia paterna en la educación de los hijos, y el deber en que se funda. Y en el día de hoy ella lo ha proclamado en cánones y recalado en encíclicas y exigido inexorablemente en sus Concordatos con los pueblos modernos, frente a todas las falanges socialistas y nacionalistas.

En España, sobre todo en estos últimos años, ¿cuántas veces y por cuántas voces no se ha dado

a los católicos por la Iglesia el grito de alarma para que sacudiesen su sopor y actuasen eficazmente en el punto capital de las reivindicaciones escolares, no consintiendo la bárbara inmolación de la niñez y juventud en el altar del nuevo Moloch, el ídolo del Estado monopolista? Y sin embargo, ante esta tremenda realidad muchísimos padres de familia aún permanecen dormidos o amodorrados. ¿Será que no les importa que les arrebaten los hijos para pervertir sus almas con una pedagogía sin Dios e implantar a su costa la repugnante dictadura del socialismo? No podemos creerlo; sino que su indiferencia y apatía se deben al desconocimiento de lo que es y del alcance y significación que tiene el sistema escolar que se viene elaborando en nuestra Patria. Por esta razón vamos a insistir una vez más—lo juzgamos deber Nuestro—en punto de tanta transcendencia.

OBJETO DE ESTA CARTA

Quisiéramos haceros ver, claramente, amadísimos diocesanos que con la implantación de la llamada Escuela única lo que en puridad se pretende es aplicar el *socialismo* en su grado máximo a la enseñanza y educación nacionales, suponiendo absurdamente que los hijos no son de sus padres, sino del Estado; y deseamos mover a los católicos todos y en particular a los padres de familia, eficazmente, a que adopten una actitud franca y decidida contra esa pretensión y sigan con perseverancia, sin desmayos de ninguna clase, aquella conducta que de ellos imperiosamente exigen de consuno su libertad personal y su conciencia cristiana.

Para proceder con orden agruparemos lo que deseamos deciros, en torno de estos tres puntos: qué es y adónde va a parar lógicamente la Escuela única; cómo marcha ya por los carriles de la Escuela única, nuestra escuela nacional; cuáles son los deberes de los padres ante el despojo de sus derechos y el asalto a sus bolsillos de que se les hace víctima.

LA ESCUELA ÚNICA

Tiene la Escuela única algunos aspectos plausibles; no lo negamos. Facilitar la instrucción a todos; procurar que se aprovechen los mejores talentos; orientar a los jóvenes hacia las carreras que mejor cuadren a sus aptitudes; todo esto, en sí mirado, es

digno de alabanza. Mas no lo es el que se pretenda realizarlo dentro de un sistema de escuela antinatural y tiránico, religioso, moral, social y económicamente desastroso, y que sólo podría llevarse a cabo en un régimen social y político de absurda comunidad de bienes y personas, cual lo propugna el socialismo, aplicado en toda su repugnante integridad. Es decir, *socializando los hijos*, como se quiere socializar, dentro del socialismo, todo lo mismo los hijos que los metros de tela que se producen en las fábricas y las fanegas de trigo que se recogen en el campo.

UN REPOSTERO Y LO
QUE SE CUBRE CON ÉL

No faltan ilusos de la sociología y pedagogía que primero se sugestionan a sí mismos y luego intentan cautivar a la plebe irreflexiva, haciéndole creer que la Escuela única es una fuente milagrosa de la que manarán raudales de sabiduría para el pueblo. Ella es—dicen—la escuela de la democracia; y por esto, *gratuita, obligatoria y común* para todos los niños de cualquier clase y condición que sean; y *única*, no ya sólo por esto, sino además por unirse dentro de ella orgánicamente todos los grados de enseñanza, desde el inferior a los superiores, con tránsito fácil y natural de aquél a éstos, mediante la *selección* de los niños y jóvenes, hecha no por la posición social y económica de sus padres, antes bien y como es justo por su propia capacidad, inclinación y mérito; a fin de que no se pierda o malogre ningún talento de la clase popular. He aquí un magnífico repostero que utilizan los fautores de la Escuela única para deslumbrar a las gentes incautas con promesas irrealizables; pero que encubre nada menos que el comunismo docente y educador, vicio-

lento, antinatural y absurdo. Impuesto por las lozías masónicas para arrancar de las almas, si posible fuera, hasta la raíz de todo sentimiento religioso.

Con motivo de los primeros anuncios serios de la Escuela única en España, dábase en una hoja volante el año 1931, la voz de alarma a los padres de familia y se les decía claramente: *La escuela única es la escuela comunista. ¿Exageración? ¿alarma infundada? De ninguna manera. Veámoslo.*

LA DIRECTRIZ DE LA ESCUELA ÚNICA

En los proyectos de la Escuela única, tal y como la entienden los políticos y pedagogos de la Idemocracia, hay una directriz y es la siguiente: la *sociación*, la idea de socializar la enseñanza y educación. Y claro está: por encima de la voluntad de los padres y contra su natural derecho, el que tienen no por el Estado sino por la paternidad, que reciben de Dios, no del Estado.

Idea tan desatinada es postulado lógico del principio—supuesto principio—de que el hombre se ordena según toda su persona y todas sus cosas a la sociedad política, al dios-Estado, al que todo debe sacrificarse; por consiguiente, los hijos también y su enseñanza y educación. Principio despótico, que pisotea bárbaramente la dignidad humana y la libertad personal; que reduce al individuo y a la familia a la condición de medio, cual si fueran para el Estado y no el Estado para ellos; que fatalmente desemboca—si el timbre de alarma del instinto de conservación no hace volver atrás—, en un Estado a imagen y semejanza, o de aquel viejo Estado español que en aras de su militarismo arrojaba los niños al Táygeto, o del Estado soviético de hoy, que proclama ser el niño propiedad *exclusiva* suya.

No, el Estado no puede hacer del individuo un

monigote sin libertad ni responsabilidad, ni de la familia un mero criadero de expósitos para su universal Inclusa. El hombre y la familia son lo que son y tienen los derechos que tienen, no por el Estado, sino por su propia naturaleza, la que Dios les ha dado, comunicándoles la facultad de transmitir la vida física por la generación y la intelectual, moral y religiosa por la educación, siendo esta vida desarrollo y complemento de aquella y radicando las dos en la paternidad, como la paternidad en la generación. La familia vivió muchos siglos antes que el Estado naciera, y desde el principio existió la paternidad con sus derechos, que, por ende, son anteriores en el tiempo y superiores en la dignidad a los del Estado. Las relaciones entre el padre y el hijo son tan íntimas y esenciales que sólo la muerte puede cortarlas; mientras que las del Estado con los ciudadanos dependen de la voluntad de ambos y pueden desaparecer con el simple cambio de nacionalidad del individuo. Con razón el padre, o la madre, al sentir atropellados sus derechos, podría decir: ¿con qué no son mis hijos sino del Estado? ¿Pues que les engendre él!

LOS DOS POLOS DE LA ESCUELA ÚNICA

La *gratuidad* de la enseñanza y la *selección* son los dos polos en que se asegura la Escuela única.

Cuanto al primero, los soñadores del sistema declaran: toda la enseñanza debe ser gratuita para todos, ya que se pretende instaurar la *igualdad ante la educación*, que es parte de la igualdad universal postulado de la democracia. Y señuelo, decimos nosotros, de antiguo usado para cazar ignorantes e incautos con los abajoriza de una absurda utopía, sólo existente en los labios de los agitadores y en la mente de las masas engañadas, porque en la realidad

de la vida lo que existe son... hombres iguales en ser todos hombres; pero distinto cada uno en el rostro, en la fuerza, en el talento, en la voluntad, en las virtudes, en los vicios, en los gustos, en todo lo demás.

Pero, en fin, sea toda la enseñanza, según quieren, gratuita para todos; pobres y ricos, ya que si el rico pagase y el pobre no, sobrevendría una diferencia, como dicen, humillante para éste y en abierta pugna con la nivelación universal que postula la democracia. Prácticamente, sin embargo, ofrecerse dos dificultades por lo menos, o dos imposibles.

Primera: hay que montar una gigantesca máquina para dar enseñanza gratuita a los millones de niños y adolescentes que se hallan en período de estudios; porque será menester darles clase y alojarlos, separados de sus familias, en edificios a propósito, y alimentarlos; vestirlos, cuidarlos, enseñarlos, recrearlos... ¿De dónde sacar los miles de millones que exige todo esto? Como no han de salir de la cabeza de los soñadores de la Escuela única; habrá que sacarlos del bolsillo del contribuyente; o, puesto en planta el comunismo, de la Hacienda del Estado. ¡Ahora qué no se nos explica cómo pueda un país soportar gastos tan enormes, sin un inminente desastre que acabaría con todas sus fuerzas vivas, con todas sus fuentes de riqueza.

Dificultad segunda: la enseñanza universal gratuita dará pie a dos vicios antisociales; la empleomanía y el abandono de la vida rural. Porque las carreras se alzarán en pocos años con la flor de la juventud campesina y artesana, con el consiguiente desprecio del campo y disgusto de los oficios manuales; disgusto y desprecio acompañados del amor a la ciudad y afición a los empleos públicos. De

donde vendrán esas dos calamidades públicas que, si ya hoy son de lamentar, calcúlese el estrago que causarían el día que lanzase en medio de la sociedad sus productos esa fábrica universal de bachilleres y licenciados, eternos candidatos a los empleos públicos.

Mas he aquí que a resolver estas dificultades viene el otro polo de la Escuela única: la *selección*. La enseñanza gratuita y obligatoria, dicen sus proyectistas, no es sino la condición previa de una selección o de varias selecciones sucesivas, estrechas, que, eliminando de los centros docentes el peso muerto de muchachos y muchachas sin condiciones para el estudio, harán posible y fácil el funcionamiento de la Escuela única. En teoría bien, pero en la práctica, ni fácil ni posible; antes lo único que harán las selecciones escolares es poner en contradicción la Escuela única con el principio de la nivelación universal.

¿Cuántos y quiénes habrán de verificar las delicadas selecciones de los cientos de miles de niños y adolescentes que, comprendidos entre los seis y los veintiséis años, tendrían derecho a seguir una carrera? ¿Con qué criterio y cuáles normas y garantías de acierto las harán? Supongamos que los seleccionadores fueren sólo veinte mil. ¿Será posible que todos tengan el mismo criterio de justicia y que se despojen de sus pasiones, afectos, prejuicios, ideario y concepto de los valores de la vida, en la summa tarea de hacer en justicia el recuento y selección de todos los jóvenes de un país para dedicar a cada uno a la ocupación que según sus aptitudes pueda dar el máximo rendimiento social? ¡Eso es un puro sueño!

Pero además: se quieren derrocar las barreras que separan unas clases de otras y se levanta la

mayor y más ignominiosa de todas entre los listos y los zoquetes, con marca oficial de tales. ¿No es ésto abrir un foso mayor entre los ciudadanos? ¿Y poner el sambenito de la idiotez a los que fueren eliminados de los esjudlos? ¿Y hacer una deshonra del trabajo manual, a que habrán de dedicarse los ineptos para la ciencia? Pues para eso no habfa por qué entonar tantos himnos en loor del trabajo manual y de la diosa democracia, a quien a la postre se la despidió, y con ignominia, de la Escuela única. En suma: las maravillas de la Escuela única son una burda fantasía propia de soñadores de oficio o de quienes no se toman la molestia de pensar.

EL LAICISMO DE LA ESCUELA ÚNICA

Hémos aquí, venerables Hermanos y amados Hijos, ante la suprema cuestión que domina todas las demás y que, al resolverse de distinta manera, es causa de la división más honda e irreductible; el laicismo en la enseñanza y educación.

El laicismo no es elemento esencial de la Escuela única, pues ésta, en absoluto, pudiera compaginarse con la educación moral y religiosa; pero figura, de hecho, como característica necesaria de ella, en los programas de sus incondicionales defensores. Esa es la realidad: en forma ya de suave, habilidosa y escurridiza neutralidad y respeto a las conciencias, o ya de aparatosa, violenta y brutal persecución, hasta el exterminio, de toda idea religiosa en toda clase y en todo grado de enseñanza. De ahí que Escuela única haya venido a ser sinónimo de Escuela laica, neutra, alea; sin Dios.

¿Qué os vamos a decir de la escuela sin Dios? Que ningún pueblo digno la puede soportar. Por eso, ha dado origen a luchas formidables en Inglaterra, Holanda, Bélgica, Alemania, ... cuando en di-

chos países se ha tratado de implantar. Sólo Rusia la soporta, bajo la espantosa y nunca vista tiranía de los Soviets.

El destierro de Dios de la escuela es un enorme absurdo moral, jurídico, científico y pedagógico, y la más grave ofensa que se puede hacer a la libertad humana y a la civilización.

SIN LA IDEA DE DIOS

ES IMPOSIBLE EDUCAR

Porque educar es formar íntegramente la personalidad del educando, de arte que salga éste hombre perfecto en el cuerpo y en el espíritu para cumplir su misión social en la vida. Y eso no es posible si a la vida le falta una orientación segura y si al cumplimiento del deber no se le da una base incommovible. Pretender realizarlo suprimida la religión es un sueño o una locura. Quitad a Dios, creador de todos, remunerador de buenos y castigador de malos, y no hay ya quien pueda sostener en alto la cadena de oro del deber. No hay imperativos ni leyes que valgan. Ni el hombre ni la sociedad me han dado la existencia; creándome; y solo aquel que, creando, comunica la existencia, puede condicionar el uso que se ha de hacer de ella, con imperativos y leyes morales, que obliguen en conciencia. Por lo que, sin la idea de Dios, no queda otro fundamento en que apoyar el orden social, que la fuerza bruta. Y por lo mismo, las ideas anárquicas son lógica consecuencia de la escuela sin Dios. Bien lo entendía así Ferrer al confesar paladinamente que con sus escuelas laicas se proponía formar, no sabios, sino anarquistas.

ENORMIDAD JURÍDICA Y PEDAGÓGICA

Jurídica, por negar al niño sus derechos sagra-

dos e inviolables; pedagógica, por ir contra la razón de ser de la educación.

He aquí la enormidad: hay que respetar, se dice, «la libertad y la conciencia del niño», tanto más respetables cuanto se hallan más indefensas; hay que dejar al niño que sea «árbitro de sí mismo», y, por ende, nada se le debe decir ni nada inculcar tocante a la religión, mientras no se halle en condiciones de elegir por sí mismo, so pena de cometer una «violación de su espíritu»; imponer al cerebro débil del niño doctrinas religiosas es deformarle en la infancia; dejad al niño llegar a la madurez, y entonces podréis, si os place, proponerle las diversas creencias, para que él elija la que más le agrade, o las deseché todas. En consecuencia: proponerle en su casa o en la escuela dogmas que ha de creer y moral que ha de practicar es un *secuestro* de sus facultades más nobles, un *embargo* de su inteligencia y su corazón.

En torno de estos tópicos manidos y envuelto en trozos de literatura de baja estofa pretende ocultar el laicismo un burdo sofisma, el más anticientífico, antijurídico, antipedagógico y antinatural que puede imaginarse, para venir a la conclusión de que el Estado debe intervenir en favor de la inocente impotencia del niño, protegiéndole con una educación laica.

LO QUE PIDE LA IMPOTENCIA DEL NIÑO

Porque es el niño impotente para empezar a alimentarse por sí mismo, pide que se le alimente; porque es impotente para andar, si no se le tiende la mano, pide, la mano protectora que guíe sus primeros pasos; porque es impotente para juzgar de lo que conviene a no a la vida que ha recibido, pide que se juzgue por él primeramente, librándole de lo nocivo y procurándole lo que es necesario o útil; O habrá que dejarla por respeto a su libertad y con-

ciencia que, árbitro de sí mismo, coma a su guisa, a riesgo de que ingiera como alimento una substancia nociva, un veneno? ¡Falso y homicida sería ese respeto! ¿No es esto claro como la luz?

Pues con los pensamientos y sentimientos no es posible hacer una excepción: porque la vida es una; y si la indigencia física del niño pide que se vaya en auxilio de su cuerpo, su indigencia intelectual y moral exigen, con mayor motivo por ser mayores, que se acuda en auxilio de su alma. En este sentido sí que se puede y debe hablar de los derechos del niño. Los tiene sagrados e inviolables a que se infunden en él hábitos fisiológicos, desde que nace fisiológicamente; y hábitos intelectuales, tan pronto como nace intelectualmente; y hábitos morales y religiosos, desde el momento que nace moral y religiosamente. ¡Si precisamente la indigencia física y moral del hombre en sus primeros años, y su inconsciencia, que le imposibilita para ser árbitro de sí mismo, es toda la razón de ser de la educación, la cual es el medio de proporcionar gradualmente al niño los elementos necesarios de todo orden para que pueda llegar a ser algún día árbitro de sí mismo!

¿Qué se puede aducir para negar en lo atañente a los hábitos morales y religiosos aquello que no hay más remedio sino afirmar en lo tocante a todos los otros? ¿Se dirá que la religión no forma parte de la vida, que es una *superstición* agregada a ella por una voluntad arbitraria? Eso podrá afirmarlo el *impro*, el *ateo*, el *materialista*, pero nadie está obligado a aceptar su afirmación; y él, en cambio, sí que está obligado a no tratar de imponerla a quienes creen y entienden que nada hay tan vital para el hombre como la religión, ya que el objeto de la religión es Dios, raíz última de todo ser, sin el cual nada vive, ni se comprende, ni nadie alcanza su fin.

Quédese, por lo tanto, el ateo con su materialismo estrecho y incapaz de explicar nada satisfactoriamente; pero nadie está obligado a aceptar como norma de vida y procedimiento de educación sistema tan absurdo, y menos los que estimamos que la vida humana sin Dios no es tal vida humana.

Ni se diga que la educación y enseñanza religiosas han de relegarse al santuario de la familia, o, si ésta lo quiere, encomendarse a los sacerdotes solamente; pero que debe hallarse ausente de las escuelas oficiales del Estado. No. Si a juicio de los padres la religión es lo más natural, profundo y necesario en la vida, es deber suyo ineludible no tolerar que el maestro en la escuela, el catedrático en el Instituto o la Universidad asesinen espiritualmente a su hijo, valiéndose del arma alevosa de su superioridad sobre el alumno para sembrar en su espíritu la incredulidad o la duda, por los innumerables medios de que pueden impunemente abusar. Y, derecho, a la vez, de los padres, imprescriptible, que un Estado digno no puede menos de garantizar, pues medios existen y bien fáciles para ello: pero no inhibiéndose, so pretexto de neutralidad, ante las diversas confesiones religiosas.

Salirse, en este asunto, por el resorte de la *neutralidad* es, lo que no se cansaba de decir el dictador ruso, *una hipocresía*. «La neutralidad escolar» proclamaba Lenin crudamente—es *una mentira y una hipocresía burguesa occidental*; jamás fué neutra ninguna escuela; y la comunista, ni lo puede ser, ni lo es. ¿Cueste lo que cueste, hay que apoderarse del alma del niño». Pero si hace ya tantos años—lo sabe todo el mundo—que levantaron el velo de la hipocresía los corifeos occidentales de la escuela laical. Fuera equívocos, lo que queremos es *destruir la religión*. (Ailloud).

Cuánto no podríamos decir si entrásemos en el aspecto moral y social de la Escuela única, gratuita, obligatoria, laica y *mixta*! Pero es hora ya de que pasemos a ver si es ella el troquel en que se quieren moldear las futuras generaciones españolas.

II

LA ESCUELA ÚNICA EN ESPAÑA

Notemos de paso al comenzar este punto, venerables Hermanos y amados Hijos, que no son de hoy, sino que vienen de muy atrás las tendencias escolares *unicistas* en España, inspiradas en el criterio monopolizador estatal de la Revolución francesa.

Pero esas tendencias han revestido, en los últimos años el carácter de una campaña real, franca, pensada y sistemática en pro de la Escuela única y que, al advenir el nuevo régimen, cristalizó en una serie de alborozados anuncios y promesas, en disposiciones emanadas del Ministerio de Instrucción Pública y en preceptos de la Constitución, algunos tajantes como éste: *La enseñanza será laica*. Así es que en el día de hoy podemos decir que tenemos la planta y se han ya puesto los pilares para una escuela nacional de tipo *soviético*. Lo vamos a ver.

HACIA LA ESCUELA ÚNICA

¡Escuela única! ¡Hay que implantar la Escuela única! He aquí el grito que hace tres años, próximamente empezó a lanzarse a los cuatro vientos por la Prensa socialista y, con más o menos descaro, por toda la demás, titulada de izquierdas. Desde entonces ese mismo es el grito de guerra de la Asociación General de Maestros, domiciliada en la Casa del

Pueblo, de Madrid, y también de la Confederación Nacional de Maestros y otras asociaciones del Magisterio nacional.

A fines del año 1930 se proclamó igualmente la Escuela única en conferencias organizadas en el Ateneo de Madrid por la Sección de Pedagogía, y allí se expuso con toda crudeza por el presidente de la Asociación General de Maestros y, meses después, Director general de Primera Enseñanza, el tipo de escuela de los Soviets, como un gran acierto de Rusia en materia pedagógica.

Al finalizar el mes de Enero de 1931 se celebró en Madrid una Asamblea de Inspectores de Primera Enseñanza; y en ella pudo verse que había inspectores totalmente envenenados con las teorías estatales de la Escuela única, de marcado sabor comunista.

En otras asambleas y congresos pedagógicos celebrados por aquellas mismas calendas, como la de Licenciados y Doctores, Catedráticos de Instituto, también se dejó oír la voz de fervientes patrocinadores de la Escuela única. Y la Federación Universitaria Escolar, o sea, la F. U. E., incluyó en su programa la Escuela única y se quitó la careta de la neutralidad, en la que nadie creía, dejando al descubierto su verdadera faz, no arreligiosa sino antirreligiosa. Después...

¿Quién no recuerda que uno de los primeros vagidos del nuevo régimen fue éste: ¡Escuela única! ¡Escuela única! y la algazara promovida en torno de él? Como por ensalmo se multiplicaron en seguida los apóstoles de la Escuela única. Sociólogos y pedagogos, inéditos hasta aquella hora, tomaron a pecho, hasta con místico fervor, la tarea de convencer a las gentes, cantando las maravillosas virtudes de la Escuela única, de que tan pronto como

se estableciese en España tal escuela, los sabios brotarían por centenas y aun por millares, y la Nación iba a transformarse en una Arcadia de bienandanzas con graneros, almacenes y despensas repletas de víveres.

AVANCES MAS RAPIDOS Y POSITIVOS

En Mayo de 1931 salió a luz, como alumbrado por la infernal quema de iglesias y casas religiosas, el primer decreto escolar por el que se excluía la enseñanza de la religión en toda escuela pública, si no la reclamaban los padres de familia, y aun en el caso de que éstos la reclamasen, si no tenía por bien dárla el maestro. El Santo Crucifijo no tardó en ser condenado al destierro de las clases; primero, cuando así le ocurriese a algún... desequilibrado, después, en absoluto.

A la vez, correrías pedagógicas oficiales, en las que el tema obligado solía ser la Escuela única y sus virtudes; y nuevos decretos modestamente calificados de avances para el establecimiento próximo de la Escuela única, merecedora por parte del nuevo Estado de toda consideración como «obra principal de la democracia».

No podían menos de hallarse a la cabeza de todo este movimiento *unicista* aquellos que más se ufanaban de ser padres de la revolución. Y he aquí que los socialistas, en el Congreso extraordinario del partido, del mes de Julio, aprobaron una ponencia en la que ordenaban a su numerosa representación en las Cortes «cuidar, primordialmente, de defender la *escuela única y laica... la enseñanza laica en absoluto... y función exclusiva del Estado*».

En las Cortes. La Comisión parlamentaria encargada de presentar el proyecto de Constitución, recogiendo los votos particulares de máximas ra-

dicar y dando de mano el silencio de la Comisión jurídica asesora, redactó el proyecto del artículo referente a la enseñanza en la siguiente forma resuelta: «La enseñanza primaria se dará en la *Escuela única*, que será gratuita, obligatoria y laica».

Y llegó en el mes de Octubre el momento de la discusión. Las minorías católicas, brutalmente atropelladas al discutirse el artículo 26, se habían retirado del Parlamento; por lo que la deliberación sobre enseñanza, más que un diálogo, fué un monólogo y cristalizó en los preceptos constitucionales que son de todos conocidos, pero que Nós vamos a recordar ahora a los padres de familia, de quienes, por cierto, en ellos ni siquiera se hace mención.

LA ESCUELA ÚNICA EN LA CONSTITUCION

¿Se impone en la Constitución la Escuela única, de ideología socialista, *monopolizada* por el Estado y aplicada a *toda* la enseñanza y educación? Expresamente y de momento, no; pero, de hecho, en la ley fundamental se ha colocado el *punto de plata* para llegar a tal Escuela única.

El artículo 48 ha caracterizado la escuela oficial adjetivándola así: *unificada, gratuita, obligatoria, laica*. He aquí la Escuela única de ideología y aspecto marcadamente socialista. Pero en nuestra Carta constitucional no se habla de monopolio docente del Estado y aun parece que no se excluye la enseñanza libre en centros privados. Decimos, no obstante, —y es de suma importancia que en ello se fijen los padres de familia— que en la Constitución se han puesto los pilares para la Escuela única *estatal, socialista y totalmente monopolizada*.

Porque en el párrafo primero del mentado artículo se dice que «el servicio de la cultura es atribución *esencial* del Estado, y que éste lo prestará por

la escuela *unificada*», o, lo que es igual, única. ¿Lo prestará respetando los derechos de los padres, o por encima y aun en contra de su voluntad? Por de pronto no lo sabemos, aunque sí sabemos que de los padres no se habla, como antes hemos dicho. De modo que a esa pregunta se puede contestar con un sí o con un no, según se interprete esa *atribución esencial* del Estado y conforme se ejerce la función a ella correlativa y, naturalmente, también *esencial*. ¿En sentido *exclusivo* o no?... Queda este punto cardinal y gravísimo del *monopolio* estatista reservado al criterio de quien legisle y gobierne. No es poco para dejarlo de tener en cuenta.

Pero hay más todavía. En el siguiente artículo, el 49, se declara que una ley de Instrucción pública determinará—con todo lo referente al sistema escolar—«las condiciones en que se *podrá autorizar* la enseñanza en los establecimientos privados». Hay aquí dos fuertes razones para temer. Primera: que esa ley podrá *no autorizar* la enseñanza privada; Segunda: que podrá autorizarla sólo en condiciones tales que sea lo mismo que no autorizarla, por ser condiciones *imposibles* de cumplirse. En conclusión: que siendo no obligatorio sino potestativo del Estado el autorizar la enseñanza en los centros privados y estando al solo arbitrio de él determinar las condiciones, en su mano está el ahogarla por completo, directa o indirectamente.

No se nombra, pues, el *monopolio*, pero sí se reserva el Estado la facultad de establecerlo. ¿Qué sucederá si los que han puesto los pilares en las pasadas Cortes, rematasen el edificio en las futuras dando esa ley de Instrucción pública? El propósito del partido socialista ya le sabemos: la enseñanza laica *en absoluto* y función *exclusiva* del Estado. Y los jerifes de la Escuela única nos contestan a eso

pregunta en unánime concordia. Oigamos a uno por todos.

Discutíase en el Parlamento este punto de la enseñanza y el principal artífice de la Escuela única—sin duda por *su factum* durante estos años en el ministerio de Instrucción pública—peroraba de la siguiente manera: «Creemos, pues, que en este aspecto social hay que superar ya aquello que aparece solamente como un afán de democratizar la enseñanza; hay que socializar la enseñanza. Y esta socialización de la enseñanza tendrá que hacerse ni más ni menos que aplicando el mismo criterio que se aplica cuando se quiere socializar cualquiera otra función o servicio del Estado».

No se puede decir más clara, pero si más cruda, cual lo dice el mismo autor, exponiendo la traza de escuela por él preferida para forjar un pueblo y dar a este pueblo una religión: «Una religión política, el comunismo. Una religión que exige la fe ciega en los creyentes, se sustituye la fe en la vieja religión por una nueva fe revolucionaria. Una religión con sus dogmas: los acuerdos de los congresos. Con sus herejías: las desviaciones. Con sus excomuniones: las exclusiones del partido. Con sus apóstoles: los agentes y propagandistas. Con sus iconos: los retratos de los personajes revolucionarios y los episodios de la Guerra Civil sustituyendo las viejas estampas clericales. Con sus mártires: las tumbas a lo largo del Kremlin en la plaza roja» (1).

Es de agradecer que nuestro primer paladín de la Escuela única nos haya presentado tan sin rodeos este atrayente ideal.

Pues tengamos en cuenta que para avanzar rápidamente en el camino que conduce hasta él se ha decretado y lleva a efecto el cierre de todas las es-

(1) R. López: «Cómo se forja un pueblo».

cuelas de la «vieja religión», donde se instruían y educaban, gratuitamente para sus padres y para el mismo Estado, hijos de las clases populares más humildes por cientos de millares; y que en cambio se piden a la vez al pueblo millones, por cientos también, para sustituir aquellas escuelas con otras que, por los carriles ya puestos en nuestra ley fundamental, avancen hacia el instrumento pedagógico del *comunismo*: ¡la «nueva religión»!

No entramos en las intenciones. Pero las obras ¿qué son? ¡Un cínico asalto a los bolsillos y un bárbaro atropello a la libertad y a las conciencias!

III

DEBERES EN TORNO A LA ESCUELA

Hemos llegado, venerables Hermanos y amados Hijos, al punto más importante de esta Carta: el de *nuestros deberes*. Nuestros decimos, de todos los católicos, frente a los horizontes de la escuela socialista perfilada en la nueva Constitución, y frente al *laicismo* no perfilado sino crudamente establecido y aplicado ya, como sabéis, en todas las escuelas y centros docentes del Estado, con la agravante de haber sido completado el cerco de la enseñanza cristiana prohibiendo enseñar a todas las Ordenes y Congregaciones Religiosas.

Mas estos deberes tocan en particular a los padres de familia, ya que sobre éstos, por tratarse de la educación de sus hijos, cae la principal tarea y la más grave responsabilidad. A los padres, pues, especialmente nos dirigimos.

ESCUELAS LIBRES

He aquí el primer deber. Necesitamos escuelas donde a los niños y jóvenes católicos se les eduque

en católico. Y como es cuestión de conciencia, en esto no podemos transigir, sino que *debemos* luchar contra el *monopolio* y la coacción en la enseñanza luchar sin descanso. Venimos, pues, *obligados* a pedir y exigir que se nos de *escuela libre*.

Decíelo expresamente el Episcopado Español en su Declaración colectiva de 20 de Diciembre de 1931, a pocos días de promulgarse la Constitución: «No obrará como buen católico quien en los actuales momentos no colaborase en las reivindicaciones escolares». Y la primera de todas es *la justa libertad de enseñanza*; porque sin esta libertad no podrían ejercitarse—afirman los Prelados— «ni el derecho natural de los padres a elegir y dirigir la educación de los hijos; ni el derecho de los mismos hijos a que la formación moral y religiosa ocupe en su educación el primer puesto; ni el derecho de la Iglesia a educar religiosamente, sin trabas, a los fieles, aun en la escuela pública»

Imponer a los creyentes la escuela laica, sin Dios, y que desemboca en la escuela contra Dios, es una coacción y tiranía. Y en una nación en su mayoría creyente, y en pueblos creyentes en su totalidad, como son la mayor parte de los pueblos de nuestra querida Diócesis, no puede ni debe consentirse esa tiranía so pretexto de que haya o pueda haber algún ateo o librepensador. La misma Constitución proclama la libertad de conciencia. Pues que no se hable de libertad de conciencia donde se pretenda ejercer esa coacción de la escuela laica, precisamente en lo más débil y más necesitado de protección: en el alma de los niños. Dénse a los disidentes, donde los haya, sus escuelas; pero no se nieguen escuelas católicas a los católicos. Es cuestión de conciencia—repetimos—, y de aquí no podemos salir,

REPARTO PROPORCIONAL

Debemos pedir y exigir también, que el presupuesto de Instrucción pública, que es de todos, porque todos le pagamos, se distribuya por igual, se reparta proporcionalmente entre la escuela oficial y la privada o libre. Esto reclama por una parte la justicia distributiva y por otra, la necesaria libertad de enseñanza.

Porque es injusticia manifiesta—se ve con tener sólo sentido común, aunque no quieren verlo ni las Logias ni los políticos por ellas manejados—que pagando todos los padres de familia las contribuciones de las que se toma todo lo destinado a la enseñanza, se obligue a los padres católicos a pagar otra vez la escuela y el maestro que prefieren para sus hijos,—lo que es obligarles a pagar la enseñanza dos veces—a no ser que quieran sacrificar su conciencia aceptando la escuela y el maestro laicos.

Además; verdadera escuela libre sin reparto proporcional escolar, no puede haberla. ¿Cómo la podrá haber en los pueblos pequeños, que son los más, si carecen de medios para sostener, aparte de la escuela pública, escuela privada de pago? ¿Y cómo la podrá tener el obrero, el pobre que por falta de recursos no puede escoger para sus hijos entre la escuela oficial y la privada? En uno y otro caso es evidente que los padres sufren la coacción intolerable de tener que llevar sus hijos a la única escuela que les da el Estado. Exige, pues, la libertad de enseñanza que la escuela privada sea también *gratuita*, en el sentido de que los alumnos no paguen porque los gastos corran a cuenta del Estado.

Por eso añadían los Prelados en dicha declaración que una de las reivindicaciones escolares en nuestro programa restaurador de la legalidad española es: «la repartición proporcional escolar que la

Justicia distributiva exige, para que la escuela pública y privada rivalicen noblemente en la elevación progresiva de la cultura popular». ... No hay otro medio eficaz, si no ese reparto que garantice los derechos de la familia en materia de educación contra el monopolio absorbente del Estado. Y ese mismo reparto proporcional es el arma invencible «para luchar contra la Escuela única laica, cuyos maestros, socialistas y comunistas, no podrán ser contenidos en sus predicciones y propagandas más que por el copuraste de una escuela rival». Así se proclamaba con razón en la Asamblea General de las Asociaciones de Padres de Familia, del pasado año, y con igual razón se añadía: «Recabemos, pues, el reparto proporcional escolar a los candidatos católicos y, por encima de éstos, a toda la opinión pública».

No podía ofrecerse ocasión más oportuna y crítica que la actual, para que os lo repitamos ahora. Nosotros a todos vosotros: *Recabad la justa libertad de enseñanza y el reparto proporcional escolar a todos los candidatos que soliciten vuestros votos. ¡Es deber de conciencia!*

OTROS DEBERES DE IN- MEDIATA REALIZACIÓN

Pero mientras no logremos, venerables hermanos y amados hijos, lo que exigen la justicia distributiva y nuestra libertad de conciencia, tenemos que cumplir otros deberes para prevenir los peligros y atajar los males que para la niñez y la juventud se derivan de la aplicación actual del laicismo.

Es muy triste que, como consecuencia de destinarse a la enseñanza laica—en una sociedad católica—la totalidad del presupuesto de Instrucción pública, al que contribuyen todos los ciudadanos del país, cientos y cientos de millares de niños católi-

cos, con evidente peligro de envenenamiento de sus almas, tengan que asistir a las escuelas oficiales laicas, porque sus padres no les pueden enviar a escuelas o colegios de pago. Mas por el momento, y hasta que vosotros mismos por el cumplimiento de vuestros deberes ciudadanos hagáis respetar vuestros derechos y vuestros más sagrados intereses, no queda otro remedio de estos males que el imponeros sacrificios para multiplicar las escuelas y centros privados de enseñanza e intensificar en ellos la cristiana educación de la niñez y juventud, al amparo de la menguada libertad que para crearlos y sostenerlos nos han dejado la Constitución y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas.

Por eso os exhortamos con las más vivas instancias a favorecer las escuelas y colegios que, utilizando la legalidad vigente, han abierto animosos seglares en esta ciudad, para proseguir, en lo posible, la labor docente y educativa de los Religiosos de uno y otro sexo; a prestar generosamente vuestra cooperación económica y personal a todas las demás escuelas y colegios particulares católicos, ya existentes, y a crear y sostener otros, especialmente en beneficio de los más perjudicados por el laicismo oficial, que son los niños de las clases populares más humildes; a preocuparos hondamente de la enseñanza catequística de vuestros hijos, secundando las disposiciones que Nós hemos ya dado—desde que nos vino la peste del laicismo—y el celo de los sacerdotes; a no limitar vuestro interés por la Instrucción religiosa en las escuelas primarias y las catequesis, pues éstas no bastan, o sólo bastan para la niñez, y es necesario, por ende, ampliar y perfeccionar la formación religiosa en la edad post-escolar y post catequística; en fin, os exhortamos a recibir con rendida y pronta obediencia, cual cumple a

hijos fieles de la Iglesia Católica, el MANDAMIENTO con que ponemos el cierre de esta Carta y en el que os damos un programa de actuación inmediata contra el funesto sistema laico de pretendida educación y, también, contra esa tremenda ignorancia religiosa—tan general entre todas las clases sociales, aun las cultas en otro orden de conocimientos—que ha sido calificada por el Pontífice reinante de plaga y vergüenza de la sociedad cristiana en los actuales tiempos.

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA

Dos palabras. La benemérita Asociación de Padres Católicos de Familia, desde los comienzos de su fundación en España, hállase establecida legalmente en Valencia. Yo no sé que haya institución más a propósito para la eficaz defensa de los derechos de la familia cristiana, en particular los referentes a la instrucción y educación de los hijos. ¡Ah! si esta Asociación se estableciese en todos los pueblos, y los padres se organizaran dentro de ella legalmente; si se uniesen y confederasen, ¡qué pronto remediarían los grandes males que en materia de enseñanza lamentamos!

¿Será necesario decir que os la recomendamos con el más vivo interés? No debe existir un pueblo en la Diócesis, ni uno solo, en el que no se organice la ASOCIACIÓN DE PADRES CATÓLICOS DE FAMILIA. ¿En qué pueblo no habrá media docena de padres que quieran preocuparse seriamente de sus hijos ante el sombrío porvenir que la escuela laica les ofrece?

MANDAMIENTO EPISCOPAL

Porque no queremos poner en peligro Nuestra propia salvación por abandono o incumplimiento de

uno de los más sagrados deberes que tenemos como Padre y Pastor de vuestras almas, y respondiendo a las preocupaciones que os hemos expuesto, después de invocar el santo nombre de Dios, venimos en decretar y mandar lo siguiente:

ESCUELAS DE RELIGIÓN

TÍTULO I

De las Escuelas parroquiales y del personal docente

1.º En todas las parroquias de Nuestra jurisdicción se establecerán Escuelas parroquiales de Religión para la enseñanza de la Doctrina Cristiana a los niños, a la hora más acomodada para que puedan asistir los alumnos de las escuelas públicas. Además de la Catequesis Dominical y de los días festivos, se dará enseñanza otros tres días a la semana, por lo menos, con duración de una hora. Párrocos celosos tienen clase diaria, y ese es Nuestro deseo.

Durante el Adviento y la Cuaresma las clases de Religión serán diarias en todas las parroquias.

PERSONAL DOCENTE ECLESIASTICO

2.º La dirección de las Escuelas parroquiales de Religión correrá a cargo de los Párrocos, quienes utilizarán la cooperación obligatoria de sus Coadjuutores y de los sacerdotes adscritos a su parroquia.

3.º Los Superiores de Casas religiosas deberán así mismo organizar Escuelas de Religión en sus respectivas iglesias o capillas, con arreglo al canon 1334, cuya aplicación nunca como ahora urge llevar a la práctica. Y no sólo enseñarán en sus propias iglesias, sino que también auxiliarán en las parroquias o los Párrocos respectivos, en cuanto el estado del personal de sus residencias se lo permita.

CATEQUISTAS SEGLARES Y COFRADÍA
DE LA DOCTRINA CRISTIANA

4.º Los Párrocos también utilizarán al mismo efecto la cooperación de Catequistas seglares voluntarios, que se reclutarán especialmente del personal mejor preparado y dispuesto de la Cofradía parroquial de la Doctrina Cristiana prescrita en el Código de Derecho Canónico y por Nuestros mandamientos episcopales, cuyo cumplimiento una vez más urgimos.

5.º Pondrán particular esmero los Párrocos en organizar un cuerpo de Catequistas, cuidadosamente formados por medio de cursillos o lecciones especiales de Religión y Pedagogía Catequística. Además, para promover y mantener la asistencia, especialmente de los niños que concurren a las escuelas públicas, hoy sin enseñanza religiosa, organizarán también uno o varios grupos de Celadoras de la Obra, que se encarguen de promover dicha asistencia, poniéndose en contacto con las familias, y de estimular la cooperación económica.

CENSO DE ESCOLARIDAD Y LIBRO
DE LA DOCTRINA CRISTIANA

6.º Para velar debidamente por la asistencia, se procederá a formar un censo especial de todos los niños bautizados de la parroquia que vienen obligados a recibir la enseñanza religiosa. El Párroco o sus auxiliares, si los tuviere, llevarán un libro bien cuidado que se titulará *Libro de la Doctrina Cristiana*, en el que se anotarán los datos personales y familiares de los niños, su asistencia y aprovechamiento y el nombre de los sacerdotes e instructores. Este libro se custodiará en el Archivo parroquial y estará sujeto a la Santa Pastoral Visita.

TITULO II

De la organización de la enseñanza.

ENSEÑANZA GRADUADA Y CÍCLICA

7.º La enseñanza se dará en forma graduada y conforme al método llamado Cíclico. Los grados serán tres: *inferior*, en el que se enseñarán las primeras nociones del Catecismo, las nociones necesarias para la recepción de los santos Sacramentos de Confesión y Comunión, y las de la Santa Misa; *medio*, donde se dará, en dos cursos, el Cómpendio de la Doctrina Cristiana a los que han aprobado las nociones del primer grado; *superior*, para los que hayan aprobado las enseñanzas elementales, o sea, las del grado segundo o medio.

Los alumnos se dividirán en clases, separando los niños de las niñas; en cada clase, que se ha de procurar no exceda de cuarenta, se enseñará cada año el programa fijado para cada grado, no pasándose al siguiente al alumno sin haber aprobado el precedente.

METODO HISTORICO

8.º Ordenamos se dé particular importancia a este método mediante el uso de la Historia Sagrada del Antiguo y Nuevo Testamento, y singularmente del Santo Evangelio, incorporándola en la enseñanza de los distintos grados: tiene importancia excepcional para cautivar la atención de los niños y hacerles más fácil la comprensión de las formas precisas y abstractas del Catecismo, el dar a la enseñanza la forma de *historia*, más bien que la de *lección*.

PROGRAMAS Y NORMAS

9.º Para mayor eficacia de la enseñanza y la mejor utilización de las exigencias de la Pedagogía,

el Secretariado Diocesano de Instrucción Religiosa se encargará de presentar a Nuestra aprobación, dentro de este año el Programa de enseñanza de los distintos grados y las Normas a que habrán de acomodarse los Catequistas.

OBIGATORIEDAD

10. Para subvenir suficientemente a la instrucción y formación religiosa de la niñez y de la juventud en las circunstancias actuales, declaramos obligatorio para todos los niños bautizados, al llegar a la *edad de la discreción, el estudio y la aprobación de los tres grados de Instrucción religiosa que se dará en las Escuelas parroquiales de Religión y en todas las escuelas y colegios católicos. En éstos se dará la enseñanza religiosa en la misma forma prescrita para aquéllas y adaptándose a los mismos textos y programas.*

DISCIPLINA DE LA PRIMERA COMUNION

11. Ningún niño será admitido a la primera Comunión, ni privada ni solemne, sin haber aprobado ante el Párroco propio el primer grado de Instrucción religiosa. Y para garantizar eficazmente la continuidad de la educación religiosa después de hecha la primera Comunión, ordenamos que, sin promesa previa de los padres o tutores hecha ante el Párroco, de continuar luego recibiendo la instrucción religiosa, por ningún sacerdote pueda administrarse a ningún niño la primera Comunión.

TITULO III

De la enseñanza religiosa en las Escuelas
y Colegios católicos

CONDICIONES PARA LLEVAR

:-: ESTE CARACTER :-:

12. Ningún centro de enseñanza podrá ostentar el carácter católico sin obtener antes Nuestra licencia *in scriptis*. Esta no se concederá sin compromiso previo de que en el centro se ha de enseñar adecuadamente la Doctrina Católica a los alumnos, con arreglo a las disposiciones de la autoridad eclesiástica; ni se podrá mantener tal carácter sin el cumplimiento de las Normas Diocesanas, del cual velará Nuestro Consejo de Instrucción religiosa, al que encomendamos, además de la vigilancia, la asistencia a los exámenes de Religión, por medio de sus delegados, y el informarnos anualmente al final de curso.

Será requisito también necesario que la elección de texto y profesor o profesores de Religión sea sometida a Nuestra aprobación.

LA INTERVENCION SACERDOTAL

13. Ningún sacerdote, de cualquier clase y dignidad que sea, ni aun extradiocesano, podrá ejercer ninguna enseñanza, ni ministerio, ni función administrativa en ningún centro docente en donde no se enseñe Religión según las Normas diocesanas y, aun en este caso, sin expresa licencia Nuestra *in scriptis* y bajo Nuestra vigilancia e inspección.

PRIMERA COMUNION

EN LOS COLEGIOS

14. Los Colegios de Religiosas que tienen internado, quedan autorizados en cuanto a sus alumnas internas y externas para celebrar la fiesta de la

Comunión solemne, pero en la fecha que acuerde el señor Cura de la parroquia y después de celebrada en ésta; y previo el cumplimiento de las Normas diocesanas obligatorias de enseñanza religiosa. Se remitirá al Párroco de la respectiva parroquia relación de las niñas que hubieren hecho la primera Comunión.

TÍTULO IV

De los estudios superiores de Religión

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES

15. Para ampliar la instrucción religiosa de los adultos se crea en Palencia un Centro de Estudios superiores de Religión, el cual se organizará conforme determine el Ordinario. Este Centro será un organismo de la jurisdicción eclesiástica y no tendrá carácter alguno civil ni de sociedad independiente.

Dependerán de este mismo Centro: a) los Círculos de Estudios de todas las asociaciones erigidas en la capital, b) las Escuelas de Catequistas; c) los cursillos o conferencias sobre materias apolo-géticas, dogmáticas, morales y sociales; d) los cursos *normales* de Religión que el Centro organizará.

Un reglamento especial determinará cuanto sea conveniente para el desarrollo y funcionamiento eficaz del Centro de Estudios superiores.

16. Se recomienda crear Centros semejantes, previa la aprobación del Ordinario, en otras poblaciones o parroquias de la Diócesis.

CATECISMO DE ADULTOS

17. Los Párrocos, en conformidad con las disposiciones canónicas, cuidarán de que no falte el Catecismo a los adultos, siguiendo el plan del Catecismo *ad Parochos* del Concilio Tridentino y di-

vidiendo la materia del mismo en cuatro años, a cuyo efecto recomendamos como obra particularmente acomodada a nuestras necesidades pastorales la «Explicación del Catecismo de San Pío V» por el P. Plat.

Los Coadjutores y sacerdotes adscritos ayudarán al Párroco en este trabajo indispensable para vencer la ignorancia religiosa de nuestra época.

TITULO V

Instituciones complementarias.

PATRONATOS Y ORATORIOS FESTIVOS

18. Recomendamos con vivo interés la fundación de *Patronatos parroquiales e interparroquiales*, u *Oratorios festivos*, así como de *Círculos de Estudios* en los Centros Católicos para complementar la Instrucción religiosa, en cursillos de apologética popular, de liturgia y de vulgarización de las Encíclicas y otros documentos pontificios.

JUVENTUDES CATÓLICAS

19. Se procurará fundar en todas las poblaciones la Juventud Católica parroquial, según las bases estatutarias de la Juventud Católica Española, con el fin próximo de formar a los jóvenes en los principios de la Religión, liabituarlos a la piedad sólida y a la profesión franca de su fe y capacitarlos para la *Acción Católica*.

La misión encomendada por la Iglesia al *apostolado seglar* en la hora presente exige una esculpulosa preparación, que no se improvisa y que debe realizarse en la edad juvenil por el cultivo de la *inteligencia* y de la *voluntad*, conforme al sentido de las tres palabras: *Piedad, Estudio, Acción*, que integran el lema de las Juventudes Católicas.

ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA

20. Fúndese así mismo en todas las parroquias la «Asociación de Padres de Familia», al objeto de garantizar, en lo posible, los derechos de los católicos en la Escuela oficial y establecer en su caso Escuelas privadas católicas, gratuitas o de pago, en las localidades respectivas.

Los padres de familia velarán cuidadosamente, mediante el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, de que la enseñanza en las escuelas públicas no sea irreligiosa y mucho menos impía, haciendo observar las disposiciones vigentes en las que se prohíbe terminantemente en la escuela «toda propaganda política, social, filosófica y religiosa». (Circular de la Dirección general de Primera Enseñanza de 14 de enero de 1932).

TITULO VI

Organización Diocesana

CONSEJO DE INSTRUCCIÓN RELIGIOSA

21. Para uniformar prácticamente en lo posible y estimular en todo caso e inspeccionar la instrucción religiosa en la Diócesis, se crea en esta Curia un Consejo Diocesano de Instrucción religiosa. Le presidirá Nuestro Vicario General y serán miembros de él el Director del Centro de Estudios superiores, el Director del Secretariado Catequístico, el Director Diocesano de las Juventudes Católicas, el Teniente-arzobispo de Palencia, los Arciprestes de la Diócesis y los Superiores de Casas de Religiosas en el Obispado.

Dentro de este Consejo habrá una Comisión ejecutiva permanente.

Las atribuciones y funciones del Consejo de

Instrucción se especificarán en un reglamento especial.

SECRETARIADO CATEQUISTICO

22. Se organizará en Nuestro Seminario Conciliar un Secretariado Catequístico Diocesano que sirva, a la vez que de ampliación y complemento de la Cátedra de Pedagogía Catequística, para llevar la estadística completa de todas las catequesis de la Diócesis, facilitar a los directores locales de éstas cuanto necesiten o pueda serles útil para su mejor funcionamiento e informar teórica y prácticamente en todo lo relativo al sector de Catequesis.

MUSEO CATEQUISTICO

23. Como parte del Secretariado se formará un Museo Catequístico, que constará de tres secciones: una de *orientación* catequística, mediante una EXPOSICION permanente, dividida en varios apartados; otra de Biblioteca catequística y de Propaganda religiosa; la tercera, en fin, de *aprovisionamiento* de material pedagógico con su oficina de PROCLAMATORIA catequística.

Se redactará igualmente un reglamento tanto del Secretariado como de su Museo.

TÍTULO ADICIONAL

En todas las iglesias del Obispado, aun las de Religiosos exentos, se hará el tercer domingo de cada mes una *COLLECTA*, cuyo producto se destinará íntegramente a los fines de Instrucción religiosa. Lo que en esta capital se recaude, así en las iglesias parroquiales como en todas las demás, se pondrá a disposición del Consejo Diocesano de Instrucción para que éste lo distribuya dentro de la misma capital, según las necesidades; lo que se re-

colecte en los pueblos se entregará a la Cofradía de la Doctrina Cristiana de la respectiva parroquia para sus fines.

Se recomienda instantemente a los católicos que aporten con generosidad limosnas y suscripciones para el fomento de la Instrucción religiosa.

Así lo decretamos y promulgamos, y mandamos se ejecute en todas sus partes.

Quiera el Señor bendecir, por intercesión de los Santos Patronos de la Diócesis, nuestros propósitos y desvelos y hacer fecundos los sacrificios que se impongan el venerable Clero secular y regular las Comunidades religiosas, piadosas Asociaciones y los buenos católicos para promover y fomentar la Instrucción religiosa de la niñez, de la juventud y de todos los hijos de la Iglesia, a fin de que, por el conocimiento y el amor de Nuestro Señor Jesucristo, con plena conciencia vivan todos la vida que Él nos ha dado, y todos permanezcan firmes en la fe, a pesar de las dificultades de los tiempos, hasta verse seguros y gozosos en las gloriosas moradas del Rey inmortal de los siglos.

Como augurio de estas esperanzas y prenda de las gracias del Cielo os damos a todos, venerables Hermanos y amados Hijos, Nuestra Pastoral Bendición en el Nombre del † Padre y del † Hijo y del † Espíritu Santo.

Palencia, Festividad de Nuestro Señor Jesucristo Rey, día 29 de Octubre de 1933.

† AGUSTÍN, Obispo de Palencia.

*Por mandado de S. E. Sr. Obispo,
el Obispo, mi Seco.*

Lic. Guillermo A. Gutiérrez, Secio.

De esta Carta Pastoral se dará cuenta al pueblo fiel en la forma que se estime más conveniente para su provecho espiritual.

26.- S. F., "Centro de cultura superior femenina."

BOE de cerama, año 11, 28 de septiembre de 1933, num 9, págs. 341-346.

CENTRO DE CULTURA SUPERIOR FEMENINA

NECESIDAD DE UNA FORMACIÓN FEMENINA

Los grandes pedagogos, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, que es la mejor madre de la ciencia, han comprendido siempre que la misión de la mujer en la vida doméstica y social, *no es idéntica a la del hombre*.

Si se la quiere formar como al hombre, *se aniquila las preciosas dotes femeninas*, se producen más fácilmente tipos "exotéricos", en los que hemos de lamentar defectos extremos y raras, y *se priva a la sociedad y a la familia*, de los bienes que podrían conseguirse con una *alta completa y alegada formación de la mujer*, que, sin quitarle sus títulos que puede adquirir en nuestra Universidad oficial, cultiva su feminidad, y la prepara para su gran misión de *madre* y de competente *directora* de las obras benéficas y sociales.

En el extranjero. Menciónase en la mujer los anhelos de una cultura superior, se han formado para ella en el extranjero muy interesantes instituciones.

En Alemania abundan los *Oberlyceas*, Centros para la cultura superior femenina. En Berlín hay además una institución donde las señoritas pueden estudiar Arquitectura y otras Artes.

En Inglaterra, Oxford, Cambridge, Edimburgo y Kesington, tienen Colegios universitarios femeninos.

Londres cuenta con una Facultad de Medicina a la que asisten 488 alumnas. En el Bedford College, hay unas 700 señoritas cursando estudios superiores, y en el Kings College, aprenden Artes, Ciencias, enseñanzas domésticas y estudios sociales.

Los Estados Unidos poseen grandiosas fundaciones. El Smith College, de Northampton, tiene unas 2.000 señoritas. El Trinity College, de Washington, es considerado como la institución católica femenina mayor del mundo. En Binghamton (N. York) el Vassar College alcanza una matrícula de 1.290 alumnas (1).

En España. — Hoy se ha despertado en la mujer española el afán por el estudio. Pero se ve obligada a acudir a las aulas universitarias o mismo que el hombre. No existe para ella una *institución peculiar*, donde pueda seguir estos estudios superiores.

(1) Los estadounidenses construyeron cuatrosveces más en estas importantes fundaciones. El Wells College, en Aurora (N. York) gastó en un curso una fortuna de ochenta mil dólares, en el Bryn Mawr College. Por salvarlos ascendieron los gastos a 170 mil dólares. Esta es una cifra tan grande que tiene por estos Estados Unidos cultura como la y la seriedad con que contribuyen a su engrandecimiento.

La Universidad instruye, pero no educa.

Tampoco da formación social y religiosa.

La mujer intelectual debe ser a la vez *educadora por excelencia*. Es también necesario prepararla para que ejerza una benéfica influencia en todas las de sus familias, y para que se educen en ambiente de armonía y de amor, que contrarresten las terribles estridencias y luchas.

Necesitamos formar ese TIPO, que sea y sienta las excelencias virtudes de la raza, enriquecida el alma con la meditación cristiana, perfeccionada con el cultivo de su inteligencia, en todo digna y noble, apta para grandes empresas, amante del hogar que embalsame con el incienso de sus abnegaciones.

Para ello se ha fundado en Madrid el Centro de Cultura Superior Femenina.

Centro de Cultura Superior Femenina.—Puede considerarse este Centro como HOGAR ESPIRITUAL de la mujer, donde halla biblioteca, cursos, conferencias, enseñanzas especiales y los medios que convegan a su utilidad y perfeccionamiento, dadas las actuales circunstancias de la vida.

Para que la instrucción tenga gran altura, se ha confiado a un Patronato técnico integrado por personas de muy altos prestigios en las ciencias y en las letras españolas.

Es una obra *para todos*. Pueden pertenecer a ella las distintas personas e instituciones simpatizantes con su alta finalidad científica, educativa y patriótica.

Enseñanzas.—Colaboración Universitaria.—El Centro de Cultura Superior Femenina podrá realizar una obra de *colaboración universitaria*, facilitando a las alumnas los estudios para las Facultades de Filosofía y Letras (1), Ciencias, Derecho y Farmacia, con arreglo a los planes y programas oficiales.

Las señoritas que estudien estas Facultades, no solo podrán recibir una *sólida preparación técnica*, base de sus futuros éxitos, sino también la formación complementaria que ha de realzar su personalidad y avalorar sus aptitudes.

Cultura superior religiosa.—En París existe el Instituto Católico para los estudios superiores de Religión. En Bruselas, l'École Saint Louis, explica Ciencias filosóficas y religiosas. Varias Universidades extranjeras, tienen la Facultad de Teología.

Este Centro abre cursos de Cultura Superior Religiosa, con arreglo a un plan sistemático, y expedirá *Diplomas* a las alumnas que hayan dado buena prueba de su aprovechamiento.

Formación social.—Ha creado esta Institución una Escuela de Servicio y de Acción Social, que está dirigida por personas eminentes en estas especialidades.

Forma *propagandistas, directoras y secretarias para las obras sociales femeninas, bibliotecarias, enfermeras, visitadoras, puericultoras, dirigentes obreras, auxiliares de la acción parroquial y de las obras de asistencia industrial y benehén.*

El plan comprende estudios teóricos y formación práctica. Las alumnas visitarán instituciones y obras, se ejercitarán en propagan-

(1) Los estudios pedagógicos se han incorporado a la Facultad de Filosofía y Letras.

las, organizadoras, estudiantes, trabajos en secretarías, bibliotecas, asistencia a enfermos, ca-mu-citas, hospitales, etc.

Aquí se abren amplios horizontes para la mujer. Por medio del *Servicio Social*, también en esta esfera de protección y de atracción entre las clases populares.

Muchas señoritas, encontrarán un vasto campo donde ejercer la caridad con mano inteligente y bondadosa y con la preparación técnica que requieren las actuales necesidades de la vida. Así, podrán ser más útiles a la sociedad y a sí mismas.

Otras, hallarán en estos sublimes oficios, un medio decoroso de subsistencia. Son tan estimadas y buscadas las señoritas que poseen esta preparación, que en los países cultos donde existen Escuelas de *Servicio Social*, es mayor la demanda que el número de alumnas graduadas.

Miles de pueblos convecidos, esperan a las *propagandistas*, que irán sembrando paz y bien y organizando las Obras convenientes.

Si en a una de nuestras reuniones ovia un grupo de alumnas a este Centro de formación, para irse a llevarse hasta el último rincón de España, las benéficas tradiciones del Servicio y de la Acción Social.

Posible, presente y futuro.—Posible.—Al calor de este ideal—la fundación del Centro de Cultura Superior Femenina—prendió la llama de una iniciativa que inmediatamente halló cooperación en un grupo de espíritus generosos.

Se organizarán interesantes cursos a cargo de grandes maestros, que hallaron entusiasta acogida entre las señoras. Al explicarse por primera vez en España la Medicina Social a las Damas Enfermeras, se hizo en el Centro de Cultura Superior Femenina.

También este Centro ha organizado las SEMANAS AGRICOLAS femeninas, que llevan la cultura y la formación religiosa y social a la mujer del campo, y la orientan en cosas de higiene, puericultura, pequeñas industrias, etc., etc., haciéndola más útil y práctica, más amante de la tierra y del hogar, más consciente de sus deberes para con Dios y para con la Patria.

Practicar.—Ahora inaugura la institución la apertura de curso en 1.º de octubre, con el plan anteriormente indicado. Podrán asistir a estas enseñanzas, todas las señoritas que lo deseen, con tal que sean ecuatoriales, ora vivan en sus casas, o en distintas residencias de Madrid, pues esta obra a todos pertenece.

El Centro tiene tambien RESIDENCIA para señoritas que se dediquen al estudio de cualquier carrera o Facultad, o que se preparen para las Obras sociales, pero solo admite un número limitado de alumnas.

FUTURO.—El porvenir de este Centro está confiado a Dios y al alma nacional, siempre consciente, grande y generosa. Se penetrarán todos los buenos españoles, de que millones de jóvenes dedicadas a los estudios superiores, no tienen en España un Centro peculiar suyo que hiciera de esas jóvenes una aristocracia de almas..., y querrán hacer de este Centro, una institución que, a ser posible, sea tan magnífica como sus similares del extranjero.

Comprenderán también que las señoritas, al terminar la educación en sus Colegios, deben prepararse para la cooperación social. Hoy sería discordante vivir solo para sí mismas o perder el tiempo en bagatelas), y las mandarían a llenarse de más cultura religiosa, de más preparación para las obras sociales.

Los padres de familia, verán que este es el Centro que necesitaban sus hijas, y pondrán todos su granito de arena para levantar un gran edificio, que sea siempre HOGAR ESPIRITUAL de la mujer católica española.

26.1. - S. I., "Centro de cultura superior femenina."

FUE de Tarazona y Tudela, año 71, 1 de octubre de 1933, num. 724, págs. 692-693.

1. Existen en España diez universidades para hombres y ninguna para mujeres.

2. Nuestra enseñanza oficial es *talca y mixta*.

3. El Santo Padre, ha bendecido efusivamente la formación del *Centro de Cultura Superior Femenina*, Institución Universitaria para señoritas, donde a más de los estudios para obtener grados académicos, se dan otras enseñanzas especiales y se expiden dos «DIPLOMAS» que no concede la Universidad y son de extraordinaria importancia: *Cultura Superior Religiosa y Servicio Social*.

4. La escuela primaria tiene la misión trascendental y sublime de formar al individuo... El Centro de Cultura Superior, realiza la imponentísima Obra de formar *multiplicadores*... es decir, personas *dirigentes*, que cada una pueda llevar tras sí cientos y miles de almas.

5. En un tiempo en que Italia se hallaba exhausta de medios económicos, después de la gran guerra, se fundó la Universidad Católica de Milán. Bastaron muy pocos días para recaudar UN MILLON DE LIRAS...

¿Ocurrirá lo mismo en España para la formación del Centro de Cultura Superior Femenina?.. Es la causa de Dios, de nuestra Patria, de nuestras *propias hijas*...

Junta de Patronato para la Dirección técnica

Rector: Conde de Cedillo, *Académico*.—Conde de Altés, *Académico*.—D. Victor Pradera, *Publicista*.—Marqués de Guad-el-Jelú, *Académico*.—Dr. D. Enrique Sñher, *Catedrático Académico*.—Doctor D. Antonio Simonena, *Catedrático Académico*.—Dr. D. F. Enriquez de Salamanca, *Catedrático Académico*.—D. José M.^a Torroja, *Académico*.—D. Julio Palacios, *Catedrático Académico*.—D. Miguel Vegas, *Catedrático Académico*.—D. Juan Zarigüeta, *Catedrático Académico*.—D. Eduardo Ibarra, *Catedrático Académico*.—D. Pío Zabala, *Catedrático Académico*.—D. Eloy Montero, *Catedrático*.—D. José Ibáñez Martín, *Catedrático*.

Junta Protectora para la función económica y propaganda

Presidente: Excmo. Sr. D. César Silló.—Vicepresidentes: Conde de Gimeno.—Conde de Gamazo.—Tesorero: Marqués de San Feir.—Secretario: D. Luis Martínez Kleiser.—Socios Protectores: Duque de Ballén.—Marqués de la Vega de Anzo.—Conde de Limpias.—Conde de Rodezno.—Conde de Mieres.—Sr. García Valdecasas, etc.

El régimen interno de este Centro está a cargo de una Junta Femenina.

IV

CAPÍTULO IV

LA LEGISLACION SOBRE MATRIMONIO Y DIVORCIO

- 1.- Decreto de 3 de noviembre de 1931 sobre competencia de los Tribunales civiles en asuntos matrimoniales.

Gaceta de Madrid, núm. 304, 4 de noviembre de 1931, págs. 746-747.

- 2.- "Avisos del Emmo. Prelado."

2 de enero de 1932, *BOE de Sevilla*, año 75, 7 de enero de 1932, núm. 1197, págs. 3-5.

- 3.- Amonestacion y suspensión "a divinis" del deán D. Luis López Doriga Meseguer.

29 de octubre y 14 de noviembre de 1931, *BOE de Granada*, año 86, 15 de noviembre de 1931, núm. 3491.

- 4.- Decreto de excomunión y privación de beneficio contra el presbítero don Luis López Doriga Meseguer.

27 de enero y 15 de febrero de 1933, *BOE de Granada*, año 83, 23 de febrero de 1933, núm. 3518, págs. 13-16.

- 4.1.- "La labor de las Cortes.- Prosigue el debate sobre el proyecto de Congregaciones religiosas.- La Cámara ovaciona la presencia del diputado sacerdote Sr. López Doriga."

'El Sol', 3 de marzo de 1933.

- 4.2.- "El diputado Sr. Lopez Doriga explica el proceso de su excomunión."

"El Sol", 3 de marzo de 1933.

- 4.3.- "El caso del Sr. López Dóriga"

"El Sol", 7 de marzo de 1933.

- 4.4.- "El diputado y ex deán señor López Dóriga es objeto de un entusiasta recibimiento en Granada."

"El Sol", 19 de marzo de 1932.

- 4.5.- "El homenaje al diputado López Dóriga"

"El Sol", 23 de marzo de 1933.

- 4.6.- "El homenaje al canonigo y diputado D. Luis López Dóriga"

"El Sol", 26 de marzo de 1933.

- 5.- Ley del divorcio de 2 de marzo de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 72, 12 de marzo de 1932, págs. 1794-1799.

- 6.- Instrucción Pastoral.- El Matrimonio Civil.

30 de marzo de 1932, *BOE de Segovia*, año 77, 30 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 137-163.

- 7.- Proyecto de ley de Matrimonio civil.

D. de S., II, núm. 163, 11 de mayo de 1931, pág. 5515, texto en el apéndice 52.

8.- Ley sobre el matrimonio civil de 28 de junio de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 185, 3 de julio de 1932, pag. 60.

9.- Instructio Pastoralis.

23 de julio de 1932, *BOE de Zamora*, año 69, 30 de julio de 1932, núm. 9, págs. 201-205.

10.- Ley de modificación de la regla transitoria cuarta de la ley de divorcio.

Gaceta de Madrid, núm. 262, 21 de septiembre de 1932, pag. 2094.

11.- Instrucción y Normas de los Prelados a los fieles en orden al matrimonio canonico.

25 de julio de 1932.

Publicado en todos los boletines eclesiásticos.- recogido en IRIBARREN, Jesús, Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974, págs 181-189 y también en Església i Estat durant la segona República espanyola, 1931-1936, III, págs. 514-522.

12.- Normas particulares a los Párrocos de la provincia tarraconense.

1 de agosto de 1932, *BOE de Barcelona*, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 15, págs. 315-317.

13.- Circular del Prelado.

S.f., *BOE de Nueva*, año 81, 1 de agosto de 1932, núm. 8, págs. 175-176.

- 13.1.- Circular num. 136.- Instrucciones acerca del matrimonio entre católicos.

8 de agosto de 1932, *BDE de Vitoria*, año 68, 10 de agosto de 1932, núm. extraordinario, págs. 401-408.

- 13.2.- Provisorato y Vicaría general del obispado.- Instrucciones sobre la celebración del matrimonio.

10 de agosto de 1932, *BDE de León*, 15 de agosto de 1932, núm. 12, págs. 275-280.

- 14.- Vicaría y provisorato general del Arzobispado.

S.f., *BDE de Burgos*, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 15, págs. 268-272.

- 14.1.- Reglas prácticas de S. Emcia. Rvdma. a los Párrocos acerca de la celebración del matrimonio canónico.

16 de agosto de 1932, *BDE de Sevilla*, año 75, 20 de agosto de 1932, núm. 1209, págs. 233-235.

- 14.2.- Reglas prácticas a los Sres. Curas Párrocos relativas a la celebración del matrimonio canónico.

10 de septiembre de 1932, *BDE de Zaragoza*, año 71, 16 de septiembre de 1932, núm. 18, págs. 314-316.

- 14.3.- Administración apostólica del obispado.- Circular dando normas sobre la celebración de matrimonios.

1 de septiembre de 1932, *BDE de Mondoñedo*, año 75, 5 de septiembre de 1932, núm. 17, págs. 153-157.

1.- Decreto de 3 de noviembre de 1931 sobre competencia de los Tribunales civiles en asuntos matrimoniales.

Gaceta de Madrid, núm. 308, 4 de noviembre de 1931, págs. 746-747.

El designio confiado a la República española de devolver al Poder civil las atribuciones de que el Estado había hecho dejación en manos de la Iglesia, será plenamente realizado cuando se estructure en leyes orgánicas el régimen de separación de ambas potestades, aprobado ya, aunque todavía no sancionado, por las Cortes Constituyentes. Pero mientras no sea cumplido en toda su integridad aquel designio, al Gobierno corresponde establecer las medidas de urgencia encaminadas a vindicar, en interés de la vida ciudadana, las funciones de soberanía por naturaleza indelegables.

Entre éstas, pocas hay tan destacadas como las pertinentes al orden jurisdiccional. Paradójicamente, el Decreto-ley de 6 de Diciembre de 1863, sobre enajenación de fueros, en el que más tarde se inspirara el Código civil, entregó a los Tribunales eclesiásticos el conocimiento de las causas de divorcio y nulidad de los matrimonios canónicos, otorgando a la Iglesia más de lo que ésta recaba para el cumplimiento de sus fines. Reconoció plena eficacia civil a las sentencias de los Tribunales eclesiásticos, resultó que el fallo de una entidad extraña a la soberanía del Estado venía a crear, modificar y extinguir derechos civiles

cuya salvaguardia es de la exclusiva competencia de éste.

Los proyectos de ley de matrimonio civil, capacidad de la mujer casada, condición de los hijos habidos fuera de matrimonio y divorcio, que el Gobierno presentará en su día a las Cortes, regularán el derecho de familia con la autonomía plena que es atributo del Poder público. Provisionalmente, y como medida de urgencia que ampare a los ciudadanos en el disfrute de sus derechos civiles,

El Gobierno de la República, a propuesta del Ministro de Justicia, decreta:

Artículo 1.º Los Tribunales ordinarios serán los únicos competentes para conocer, con efectos civiles, de las demandas sobre divorcio y nulidad de matrimonio, cualquiera que sea la forma de su celebración.

Las causas para interponer dichas demandas y la acción que en su caso se ejercite se regularán por lo dispuesto en los artículos 101 a 107, inclusive, del Código civil.

En cuanto a los efectos de la nulidad y del divorcio se estará a lo establecido en los artículos 67 a 74, inclusive, del mismo Cuerpo legal.

Artículo 2.º Los pleitos sobre divorcio y nulidad de matrimonio se

solamente por el procedimiento para el juicio ordinario de mayor cuantía.

Recabada sentencia, el Juez de primera instancia elevará los autos a la Audiencia territorial, la que, oídas las partes, si se personaren, y siempre el Ministerio público, confirmará, modificará o revocará la sentencia, según estime procedente.

Artículo 3.º Las disposiciones del artículo 68 del Código civil y las derivadas de preceptos legales concordantes que se hubieren adoptado en orden a la substanciación de peticiones sobre divorcio o nulidad de que en la actualidad conocen los Tribunales eclesiásticos, quedarán acotadas, a instancia de uno de los cónyuges litigantes, si en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación de este Decreto, no se acredita haber sido interpuesta y admitida ante los Tribunales ordinarios la respectiva demanda.

Artículo 4.º Los efectos civiles de las ejecutorias sobre divorcio o nulidad de matrimonio, emanadas de los Tribunales eclesiásticos, quedarán suspensos mientras el litigante a cuyo favor hubiere sido pronunciada la sentencia no obtenga de los Tribunales ordinarios, por el modo que establece este Decreto, el reconocimiento de su derecho al divorcio o a la declaración de nulidad.

No se procederá a la inscripción en el Registro civil de las sentencias firmes dictadas por los Tribunales eclesiásticos con posterioridad al 14 de Abril del corriente año, ni respecto a

la misma cantidad los Tribunales de la jurisdicción ordinaria en sus distintos grados, revocación alguna referente a la ejecución en lo que atañe a los efectos civiles y principalmente en cuanto se relacione con lo prevenido en los artículos 1433 y siguientes del Código civil.

Artículo adicional. El presente Decreto deja subsistente, a virtud del derecho interno de la Iglesia, como persona jurídica, cuanto concierne al procedimiento canónico de los matrimonios contraidos ante la Iglesia católica.

Dado en Madrid a tres de Noviembre de mil novecientos treinta y uno.

Al Presidente del Gobierno
de la República,
MANUEL AZAÑA

Al Ministro de Justicia,
FRANCISCO DE LOS RÍOS UTRUJIL

2.- "Avisos del Embo. Prelado."

2 de enero de 1932. *BOE de Sevilla*, año 75, 7 de enero de 1932., núm. 1197, págs. 3-5.

Al publicar en este Boletín Eclesiástico la gravísima Declaración colectiva de todo el Episcopado español, en la que protestamos contra la nueva situación legal creada a la Iglesia en España con la Ley fundamental del Estado y reprobamos el atentado jurídico cometido en contra de la Iglesia, y al mismo tiempo damos los Prelados normas prácticas y concretas para que por estas se rijan los católicos españoles, hemos de dar los siguientes avisos:

1.º Encargamos a los Srs. Curas y Rectores de todas las iglesias y Capillas públicas seculares y regulares que lean el mencionado documento en las Misas u otros actos de mayor concurso de fieles en sus respectivos templos y Capillas.

2.º Para descargo de Nuestros deberes apremiantes, encargamos a todos ellos en vista de la multiplicación de casos de matrimonios civiles entre católicos que llamen la atención especial de los fieles sobre el contenido del párrafo II de la Declaración colectiva del Episcopado. Es urgente necesidad que advertimos en Nuestra diócesis el hacer comprender su lastimoso estado a los que por ignorancia o seducción o acaso por coacción, pretendiendo igualar el matrimonio civil y el matrimonio canónico-doloroso es confesarlo-celebran el llamado matrimonio civil y viven como si fuesen verdaderos casados; siendo así que no existe para los cristianos verdadero matrimonio si no se contrae en la forma prescrita por la Iglesia; solo ésta, como depositaria de los sacramentos, es la que ha recibido de Jesucristo la potestad de determinar los requisitos necesarios para la validez del contrato matrimonial entre personas bautizadas y, por esto, sujetas a la divina Autoridad de la santa Iglesia.

Hoy, más que nunca, es preciso recordar a los fieles que nuestro divino Redentor Jesucristo elevó el contrato natural matrimonial a la dignidad de verdadero Sacramento y fuente de la divina gracia; de tal manera que es inseparable para los cristianos el con-

trato y el sacramento. Si no se recibe el sacramento del matrimonio, no hay contrato matrimonial válido para los bautizados. Por consiguiente: lo que se llama matrimonio civil no es verdadero matrimonio para los cristianos. Las leyes humanas no tienen virtud de anular lo que Jesucristo ha establecido. Contra la ordenación de Dios de la cual la Iglesia es ejecutora con poderes para determinar en esta materia la forma necesaria externa con la cual ha de contraerse el matrimonio, no hay potestad civil en la tierra, que pueda dar validez al contrato matrimonial de los cristianos.

Ante Dios, ante la conciencia cristiana, ante la religión católica, el único matrimonio verdadero es el sacramento recibido en la forma que la Iglesia católica tiene establecido, ante el sacerdote legítimamente autorizado para presenciarlo y bendecirlo. Es más: aunque se diese el caso de que algún católico renegase de su fe y de su religión santa, no quedará casado mientras no se case según lo ordena y prescribe la santa madre Iglesia. Esta es la única doctrina verdadera acerca del matrimonio.

5." Piensen bien todos los padres y madres de familias cristianas la enorme responsabilidad que contraerán ante Dios y ante su conciencia, si no impiden por todos los medios posibles que sus hijos contraigan el llamado matrimonio civil en vez de casarse por la Iglesia y según esta lo ordena. Piensen bien los jóvenes católicos en la situación que se acarrearían si desobedeciendo la ley de Jesucristo y de su santa Iglesia nuestra madre, se unen conyugalmente sin haber recibido el sacramento del matrimonio. Piensen bien las jóvenes cristianas las graves consecuencias que les pueden sobrevenir a ellas y a sus hijos de la unión conyugal mediante el matrimonio civil, que ni es matrimonio verdadero, ni es indisoluble, ni está garantido con la perpetuidad esencial del sacramento.

Meditad, amados hijos, en este asunto. Os rogamos que no os separéis de la doctrina católica acerca del matrimonio; ni se proponen a prescindir de la recepción del sacramento del matrimonio los que intenten casarse.

A nuestros amados párrocos les encargamos que lean estos avisos a sus fieles y se esfuercen en velar por la santidad de la constitución de los hogares cristianos.

Sevilla, 2 de Enero de 1932.

† EL CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA.

3. 29 de octubre y 14 de noviembre de 1931. Amonestación y suspensión "a divinis" del deán D. Luis LOPEZ DORIGA MESEGUER.

BOE de Granada, año 36, 15 de noviembre de 1931, núm. 3491.

«Los frecuentes e inusitados ataques de que se ha hecho objeto durante más de medio año a la Iglesia Católica, y que han herido los sentimientos más tiernamente acariciados por todos los fieles, han dado ocasión a que muchos de ellos hayan expresado su profunda pena, su adhesión a la Autoridad eclesiástica y su protesta más sincera. Estas manifestaciones, sobre todo, se han multiplicado a raíz de los últimos acuerdos de las Cortes, incorporando a la Constitución artículos abiertamente sectarios, conculcadores de los legítimos e imprescriptibles derechos de la Iglesia en materias tan importantes como las relaciones entre la misma y el Estado, Presupuesto del Culto y Clero, Ordenes religiosas, Familia y Escuela; y la protesta ha culminado al hacerse pública la actuación desdichada e inexplicable de uno de los diputados por esta provincia de Granada que a su condición de parlamentario une la de ocupar la primera Silla, después de la Pontifical, en su cargo de Deán de esta Metropolitana. De la Diócesis y de fuera de la Diócesis, por escrito y verbalmente, ha llegado a la Autoridad eclesiástica la protesta y la condenación de esa conducta y no ha sido el último, ni mucho menos, el Excelentísimo Cabildo Catedral, que de una manera decidida y con una alteza de miras que le hace acreedor a todo elogio se ha puesto como siempre al lado de la misma, ha tomado acuerdos que le enaltecen y ha significado su deseo de que esta protesta se hiciese por escrito y verbalmente, para que los fieles y aún todas las personas honradas sepan que el Excmo. Cabildo en manera alguna puede solidarizarse con la conducta de uno de sus miembros, siquiera sea de quien ordinariamente lo preside.

He aquí el texto del acuerdo:

«En la sesión del Cabildo extraordinario celebrado en la mañana de hoy (18 de Octubre) se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero. Manifestar el sentimiento, desagrado y protesta del Excmo. Cabildo por la actitud del señor Deán

en lo que toca a los altos intereses de la Religión: actitud con la que en manera alguna puede solidarizarse.

Cuarto. Por el buen nombre de la Corporación, ver el modo de que conste en el «Boletín Oficial», el primero de los acuerdos anteriores.

Lo que pongo en conocimiento de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

Siguen las firmas del Presidente y Secretario».

LA AMONESTACIÓN

«En cumplimiento de los deberes de Nuestro ministerio y haciendo uso de las facultades que Nos corresponden, ordenamos y mandamos al M. I. Sr. D. Luis López Dóriga Meseguer, Decán de esta Santa Iglesia Metropolitana, que en el plazo improrrogable de diez días, a contar de la fecha de este decreto, dé pública y cumplida satisfacción al pueblo católico español, escandalizado por sus manifestaciones doctrinales y por su negligencia en la defensa de los derechos y principios de la Iglesia Católica, contra lo que repetidas veces, de palabra y por escrito, Nos había prometido solemnemente; en la inteligencia de que, si no lo hiciere o de tal forma lo llevar a cabo que no merezca Nuestra aprobación, quedará *ipso facto* suspenso *a divinis*, sin perjuicio de todo lo demás a que hubiere lugar en derecho y de la imposición o declaración de las otras penas en que pudiera haber incurrido por su actuación.

Dado en Granada, a veintinueve de Octubre de mil novecientos treinta y uno. —† LINO, Obispo de Tabbora, Vicario Capitular, S. V., del Arzobispado. — Rubricado. — Por mandato del Excmo. Sr. Vicario Capitular, S. V., Obispo de Tabbora, mi Señor, *Dr. Vicente Tena*. — Rubricado».

LA SUSPENSIÓN «A DIVINIS»

«En virtud de las facultades que por Derecho Nos corresponden, y en cumplimiento de la sacratísima obligación que sobre Nos pesa de velar por la disciplina eclesiástica de los clérigos y por la integridad de la fe de todos Nuestros Diocesanos, vista la actitud de contumacia en que se ha colocado el M. I. Sr. D. Luis López Dóriga Meseguer, Decán de la Metropolitana de Granada, negándose a la rectificación que se le exigió por Nuestro De-

creta de 29 de Octubre próximo pasado, atendido que la carta a Nos dirigida publicada con anterioridad en concepto de carta abierta en un periódico de Madrid, lejos de significar retractación más bien entraña ratificación de la conducta y de los juicios que motivaron la conminación de penas canónicas del referido Decreto, y considerando que las afirmaciones contenidas en documentos de la mayor publicidad son incompatibles con la Doctrina católica contenida en diversos Documentos Pontificios, singularmente en las Encíclicas «*Acerbissimum vobiscum*» de Pío IX, «*Arcanum Divinae Sapientiae*» e «*Immortale Dei*» de León XIII, «*Quanta cura*» de Pío IX, «*Vehementer Nos*» de Pío X, «*Casti connubii*» de Pío XI, proposiciones 56, 58, 77, 78 y 79 del *Syllabus*, y teniendo en cuenta que han precedido las convenientes moniciones de todo género y que no quisimos hacer uso de la facultad que Nos otorga el canon 2222, esperando que la discreción del referido señor Deán habría de evitarnos llegar al trance dolorosísimo de declararlo incurso en penas canónicas; en descargo de Nuestra responsabilidad ante Dios y ante la Iglesia, y con deseo ferviente de que esta pena de carácter medicinal surta cuanto antes el efecto curativo que la Iglesia se propone con su imposición y de que cuanto antes podamos tener la satisfacción de anular sus efectos, reparado el escándalo y restablecida la disciplina canónica.

Intimamos al susodicho Sr. Dr. D. Luis López Dóriga Mesquer la pena de suspensión a divinis en que le declaramos incurso, pudiendo recurrir de este Nuestro Decreto para ante la Sagrada Congregación del Concilio, que únicamente tiene competencia para resolver en contra de este Nuestro Decreto.

Dado en Granada a catorce de Noviembre de mil novecientos treinta y uno. — *Lina*, Obispo de Tabora, Vicario Capitulár del Arzobispado S. V. — Rubricado. — Por mandado de Su Excia. Rvdma., Dr. Vicente Tena. — Rubricado.

4. - 27 de enero y 15 de febrero de 1933, Decreto de excomunion y privación de beneficio contra el presbítero don Luis López Doriga.

BOE de Granada, año 38, 23 de febrero de 1933, núm. 3518, págs. 13-16.

VOS DOCTOR DON LINO RODRIGO RUESCA,
Obispo Titular de Tabbora y Vicario Capitalar S. V. de
este Arzobispado.

A CUANTOS EL PRESENTE VIEREN:

Hacemos saber, que la Sagrada Congregación del Santo Oficio Nos ha remitido, para su ejecución, un Decreto del tenor literal siguiente:

Hay un sello con las Armas Pontificias y una inscripción en tinta roja, que dice así: Suprema Sacra Congregatio Sancti Officii.

Núm. di Protoc. 66.032.—Ex aedibus S. Officii, die 27 januarii 1933.

Excellentia Rev.ma,

Ad examen iterum revocato casu Sacerdotis ALOYSII LOPEZ DORIGA MESEGUER, Decani istius Ecclesiae Cathedralis Granatensis et apud «Cortes Constituyentes» Hispanicis Diputatum munere fungentis, E.mi ac Rev.mi patres huius Supremae S. Congregationis S. Officii, praevia accurata ac matura causae discussione, feria IV, die 11 januarii currentis, sequens addiderunt decretum:

«Sacerdos ALOYSIUS LOPEZ DORIGA MESEGUER, Decanus Ecclesiae Cathedralis Granatensis, declaretur excommunicatus ad normam canonis 2314, cum omnibus iuris effectibus ad praescriptum canonis 2257, et privatus beneficio, quo ipse qua Decanus in Capitulo Cathedrali Granatensi politur, vi canonis 2340, 2.º

«Praesens vero decretum per Exc.mum D.num Vicarium Capitularem Granatensem Sacerdoti Aloysio López Doriga Meseguer in praescripta forma canonica intimetur ac dein per insertionem in proximum numerum folii periodici illius Archidioecesis evulgetur.

«Excellentiae Tuae Rev.nae munus igitur committitur praefatum decretum executioni mandandi ac dein referendi quibusnam animi dispositionibus Sacerdos supra memoratus illud suscepit,

simul exemplar folii periodici transmittendo, in quod decretum ipsuin fuerit insertum.

Impensae meae observantiae sensus Tibi obtestor permanens.

Excellentiae Tuae R. mae addictissimus

D. CAND. SBAHRETI.

Episcopus Sabinensis et Mondelensis, Secretarius.

*Excmo ad Rev.mo D.no D.no LINO RODRIGO RUESCA,
EPISC. TIT. Tabburen. Vicario Capitulari GRANATEN.*

Para llevar a ejecución el mismo Decreto, Nos hemos dictado el siguiente:

«Granada 15 de Febrero de 1933.

Acatamos y aceptamos reverentemente el Decreto preinserto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, y en cumplimiento de cuanto en el mismo se Nos ordena, venimos en declarar y por el presente declaramos, al Sacerdote de Nuestra Jurisdicción, D. Luis López-Dóriga y Meseguer, excomulgado con todos los efectos jurídicos que prescribe el canon 2257 del Código de Derecho Canónico.

De igual modo y en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2.º del canon 2340 del expresado Código, declaramos al mismo Sacerdote D. Luis López-Dóriga y Meseguer privado del Beneficio de Deán de esta Santa Iglesia Basilica Metropolitana de que gozaba.

En su consecuencia, el referido Sacerdote D. Luis López Dóriga y Meseguer deberá ser tenido por todos como tal excomulgado y depuesto del expresado Beneficio de Deán de la Metropolitana de Granada.

Notifiquense, tanto el Decreto del Santo Oficio, como esta Nuestra ejecutoria al mencionado Sacerdote D. Luis López-Dóriga y Meseguer, por conducto del Obispado de Madrid-Alcalá, donde aquél reside, en armonía con lo determinado en el canon 1719.

Publiquense ambos decretos en el primer número del *Boletín Oficial* Eclesiástico de esta Archidiócesis, uno de cuyos ejemplares se remitirá, según lo mandado, a la misma Sagrada Congregación.

Así mismo y en forma acostumbrada se notificarán ambos decretos al Excmo. Cabildo Catedral, a los efectos oportunos; quedando de todo ello testimonio bastante en nuestra Cancillería.

Lo decretó y firma el Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Lino Rodrigo y Ruesca, Obispo Titular de Tabbora, Vicario Capitular S. V. de este Arzobispado, en Granada fecha ut supra.

† LINO, OBISPO DE TABBORA.

Vicario Capitular S. V.

Por mandato de S. E. Rvdma. el Sr. Vicario Capitular,
LIC. JOSÉ MORATALLA MOYA.

Vicesecretario

4. 1. - 2 de marzo de 1933. La labor de las Cortes. -
 Prosigue el debate sobre el proyecto de
 Congregaciones religiosas. - La Cámara saluda con una
 ovación la presencia del diputado sacerdote Sr. López
 Dóriga.

'El Sol', 3 de marzo de 1933.

La Cámara ovaciona al diputado sacerdote Dr. López
 Dóriga.

En este momento entra en el salón el diputado
 radical socialista, león de la catedral de
 Granada, Sr. López Dóriga, recientemente
 excomulgado por las autoridades eclesíasticas.
 Todos los diputados, excepto los de la extrema
 derecha, prorrumpen en una clamorosa ovación, que
 dura varios minutos. El Sr. López Dóriga,
 visiblemente emocionado, queda unos momentos en
 pie, agradeciendo los aplausos de la Cámara con
 inclinaciones de cabeza.

4.2. - El diputado Sr. López Doriga explica el proceso de su excomunión.

"El Sol". 3 de mayo de 1933.

Los periodistas interrogaron en el Congreso al ex-dean de la catedral de Granada y diputado radical socialista Sr. López Doriga, acerca de los motivos por los que ha sido excomulgado por el Santo Oficio.

El Sr. López Doriga manifiesta que, como síntesis de la tramitación y resolución de este asunto, facilitara las siguientes noticias:

"Yo no tengo que reprocharme absolutamente nada de mi conducta ni de mi moral, ni tampoco de mi actuación política. he procedido siempre procurando hacer el bien, con arreglo a la mas estricta moral cristiana, y en este sentido mi conciencia está absolutamente tranquila. He tenido con el vicario de Granada una copiosa correspondencia, cuyas cartas y documentos conservo para publicarlos en su día, en los cuales está reflejada de una manera inequívoca mi actuación en el Parlamento y fuera de él, y he procurado también en todo momento que se me dijera concretamente, sin haberlo conseruido, cual era el error en que hubiera podido incurrir, para rectificar en el acto, si se me hubiera demostrado que había procedido en contra de los principios de la moral cristiana.

Vamos resumen de cuanto he dicho. Así tienen ustedes copia de la siguiente carta:

"En Madrid a 24 de febrero de 1933 comparece ante el ilustrísimo señor Obispo General de la diócesis D. Luis López Doriga, dean de la santa Iglesia catedral de Granada, diputado de las Cortes constituyentes y, después de darsele lectura del decreto de la Santa Congregación del Santo Oficio de 27 de enero del corriente año y del dictado para su ejecución por el ilustrísimo señor obispo de Tabora, vicario capitular (S.V.) de Granada, se le hizo entrega de la copia de uno y otro, dándose por tanto el Sr. López Doriga por notificado de ello.

En testimonio de lo cual, firma con S.S., de que certifico, Luis Lopez Doriga.- El vicario general, Moran.- El secretario, Marco."

Terminada la lectura, el Sr. López Doriga manifestó que acataba, aun con la consiguiente amargura, el decreto de la Sagrada Congregación del Santo Oficio; pero que le sorprendia que sin haberle dicho nada la S.C. en relacion con el escrito que le dirigió el 24 de septiembre ultimo, le declare ya incurso en excomunion y privado del decanato. Añadió que declaraba de nuevo que nunca ha querido ni defender ni obrar nada en contra de los principios católicos. Que no desea mas que acertar y hacer el bien, rechazando de plano todo error o equivocacion en que haya podido incurrir, y que reitera el ruego que tiene hecho a la S.C. de que se le concreten en forma de proposiciones aquellas afirmaciones suyas que resulten incompatibles con el dogma o con la moral católica, con el fin de dar acerca de ellas todas las explicaciones que se consideren necesarias y dispuesto a aceptar como católico la doctrina que como tal declare la Santa Sede

4. 3.- El caso del Sr. López Doriga.

"El Sol", 7 de marzo de 1933.

Se nos ruega la publicación de estas líneas:

"Entre las innumerables adhesiones que se reciben en la Juventud Radical Socialista de Madrid testimoniando la simpatía hacia el diputado sacerdote D. Luis López Doriga, merece resaltarse un telefonema recibido ayer de Bilbao, que envía D. Fermín Pardo concebido en los términos siguientes:

"Ruego transmitan nombre este modesto ciudadano para animo sacerdote López Doriga y adhesión personal como ciudadano y católico a su conducta, lamentando ceguera intransigencia Congregación Santo Oficio, caso digno sacerdote, verdadero interprete doctrina Cristo. Contristado mi ánimo ante conducta autoridades eclesíasticas, que pretenden hacer incompatibles nuestros puros sentimientos religiosos hermanados con régimen libertad espontáneamente logrado por nación española como base para llegar régimen verdaderamente humano y cristiano. Dios nos juzgara a todos. ¡Viva la República!"

Esta Juventud Radical Socialista se complace en manifestar que se cuentan por millares las firmas estampadas en los pliegos de adhesión a López Doriga, instalados en su domicilio social, plaza del Callao, 4 (Palacio de la Prensa).

1915

4. 4. El diputado y ex deán señor Lopez Doriga es objeto de un entusiasta recibimiento en Granada.

17 de Mayo de 1915.

GRANADA 16 de Mayo. Ha llegado de Madrid el ex deán de la Catedral y diputado D. Luis Lopez Doriga, al que han recibido representaciones de los partidos de izquierda y muchos obreros y estudiantes, que le han aplaudido con entusiasmo.

Esta noche se celebrará un banquete popular en su honor, y como desagravio por la excomunion de que ha sido objeto.

Banquete popular.

GRANADA 16 de Mayo. Se celebró un banquete popular, organizado por el partido radical socialista, en honor del diputado y ex deán de esta catedral, D. Luis Lopez Doriga, en señal de desagravio y adhesión con motivo de su excomunion.

Asistieron unos 200 comensales de todos los partidos de izquierda, y algunas señoras. Presidieron las autoridades y se leyeron numerosas adhesiones. El presidente del Comité provincial, D. Rodríguez Malina, ofreció el homenaje.

Seguidamente, el Sr. Lopez Doriga se levantó, entre grandes aplausos, y se oyeron gritos de "¡Viva el gran republicano!", "¡Viva el hombre valiente!"

El Sr. Lopez Doriga pronunció un discurso, en el que explicó su actitud como diputado democrata y como sacerdote, y terminó con vivas a España, a la república y a Granada.

Fue muy aplaudido.

El almuerzo popular que se prepara en Madrid.

La Comisión organizadora de este homenaje comunica a los simpatizantes que ya está fijado el sitio donde se celebrará el acto.

17 de Mayo

4. 5.- El homenaje al diputado Lopez Doriga.

"El Sol", 23 de marzo de 1933.

La Comision organizadora del almuerzo popular en honor de don Luis Lopez Doriga, que se celebrara el proximo sabado, encarece por nuestro conducto a cuantos deseen adquirir tarjetas que lo hagan a la mayor brevedad, ya que las numerosas peticiones recibidas, tanto de Madrid como de toda España hace inminente el agotamiento de aquellas.

Al final del almuerzo se hara entrega al ilustre sacerdote y diputado de un artistico album de firmas de adhesion, donado por la Juventud Radical Socialista Madrileña, lo ofrecera en su nombre el Sr. Culebra, y seguidamente hara uso de la palabra la señorita Martin de Antonio, en representacion de la comision organizadora; don Fernando Valera, por el Comité Ejecutivo Nacioanl; D. Marcelino Domingo, ministro de Agricultura, y el agasajado.

Se recuerda que las tarjetas pueden adquirirse en los siguientes sitios: ...

4.6.- "El homenaje al canónigo y diputado D. Luis López Dóriga"

"El Sol", 26 de marzo de 1933.

En un popular restaurante de Cuatro Caminos se celebró ayer un banquete homenaje organizado por el partido radical socialista como acto de desagravio al canónigo deán de la catedral de Granada y diputado a Cortes D. Luis López Dóriga, quien como se sabe, ha sido excomulgado.

Más de mil personas, entre éstas numerosas mujeres, acudieron a testimoniar al Sr. López Dóriga su consideración y su solidaridad con su posición política.

La mesa presidencial estaba adornada con flores y banderas republicanas.

Tomaron asiento al lado del agasajado D. Fernando Valera, que ostentaba la representación del Comité nacional del partido radical socialista; D. Félix Gordón Ordás, el gobernador civil de Madrid, D. Mariano Joven; D. José Salmerón, director general de Montes; el subsecretario de Obras Públicas, D. Teodomiro Menéndez; D. Vicente Sol, director general de Prisiones; la señorita Martín de Antonio y otros destacados miembros de la agrupación radical socialista de Madrid. Al llegar al local, el señor López Dóriga fue objeto de una entusiasta acogida.

Al servirse el café, un individuo de la Comisión dio cuenta de los millares de adhesiones recibidas entre las que se destacan una carta de D. Marcelino Domingo y otra de la señora Nelken. Hizo notar que se hallaban en el banquete representaciones de todas las fuerzas republicanas y socialistas de España, ya que habían acudido significados representantes del partido radical, Acción Republicana y socialistas. También dio cuenta de que el Ateneo de Madrid había enviado una efusiva adhesión, invitando al ilustre sacerdote excomulgado D. Luis López Dóriga a ocupar la cátedra para que expusiera los sentimientos religiosos y democráticos que sostiene.

Primeramente hizo uso de la palabra el representante de las Juventudes Socialistas, Sr. Culebra, que ofreció el agasajo en nombre de las Juventudes.

La señorita Martín de Antonio, de la Comisión organizadora, y el presidente del Comité radical socialista de La Coruña hablaron seguidamente.

Don fernando Valera puso de relieve la significación cordial del acto.

A continuación, D. Teodomiro Menéndez, en nombre del partido socialista, se adhirió al homenaje.

Después habló el Sr. Gordón Ordás. *"El hecho que nos congrega -dijo- es un nuevo episodio de la eterna lucha de España. Siempre ha luchado en nuestro país el espíritu de intransigencia con el espíritu liberal. A López Dóriga se le ha querido marcar con un signo infamante, causando con ello un profundo dolor en el alma católica de nuestro correligionario, y más aun en el de su anciana madre, dama de creencias católicas profundamente arraigadas.*

López Dóriga nos demuestra que se puede ser un fervoroso católico y un hombre de izquierdas. El votó la separación de la Iglesia y el Estado y la ley del Divorcio. Han querido apartarle de la religión como si hubiera fuerzas capaces de arrancar del corazón del hombre el del Dios en quien cree".

Propone que se envíe un telegrama de saludo a la madre de López Dóriga y exhorta a los republicanos a tener en cuenta que sus luchas de partido y sus rencores pueden presentarles ante el enemigo desunidos e indefensos.

Da las gracias a los representantes de los diferentes partidos y termina con un viva a la República, que es entusiásticamente contestado.

Discurso del Sr. López Dóriga

Al levantarse a hablar el señor López Dóriga, una banda de música ejecutó el Himno de Riego, que los comensales escucharon en pie, y al terminar se desborda el entusiasmo. El Sr. López Dóriga dice: *"Mis primeras palabras son un saludo para unos amigos presentes y ausentes. Vosotros, que sois discretos, sabréis comprender lo delicado de mi situación. Desde que tengo uso de razón siento el ideal democrático que es el verdadero espíritu del Evangelio.*

Cuando por el voto de miles de honrados ciudadanos fui elegido diputado a Cortes he cumplido con mi deber, aun sabiendo que arriesgaba riquezas, honores, tranquilidad y favor. En los debates yo no he negado ningún dogma. Cuando la separación de la Iglesia y el Estado, la voté porque creí que era una obligación de católico, entre cuyos deberes figura el respeto al Poder constituido; en el divorcio sostuve la teoría de que para los católicos no existe el divorcio vincular ni otro matrimonio que el canónico; pero no se puede obligar a lo mismo a los no católicos. Decidido a actuar en política, me hice radical socialista porque soy demócrata, soy radical y soy socialista, y creo que no habrá justicia mientras no se modifique el concepto de la propiedad.

Yo he sido excomulgado por el Tribunal de Inquisición y del Santo Oficio como incurso en el canon 2.314, considerado como hereje formal. Yo no puedo hacer nada contra la sociedad universal y divina de los creyentes católicos; pero sí contra la secta de los fariseos (Gran ovación), que han desfigurado el sentido de la Iglesia. Esa secta que ha engendrado el odio y ha hecho al pueblo que vaya contra ella, y con el pueblo voy yo. (Nueva ovación).

No buscan el poder espiritual, sino el material, y cuando se les pregunta para qué lo quieren, su hipocresía les hace decir que para la mayor gloria de Dios. Esta secta, si quiere demostrar que no lo es, ha de renunciar a sus bienes materiales; sus sacerdotes han de trabajar como San Pablo, con sus manos, para mantener sus necesidades, y los buenos católicos no han de emplear nunca la violencia, que no la tolera la verdadera religión ni en defensa de Dios".

El Sr. López Dóriga fue ovacionado entusiastamente al terminar su discurso. El acto terminó con vivas a la República y a los partidos republicanos.

5.- Ley del divorcio de 2 de marzo de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 72, 12 de marzo de 1932, págs. 1794-1799.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado y sancionado lo siguiente:

L E Y

CAPÍTULO PRIMERO

Del divorcio.—*Son causas.*

Artículo 1.º El divorcio decretado por sentencia firme por los Tribunales civiles disuelve el matrimonio, cualquiera que hubieran sido la forma y la fecha de su celebración.

Artículo 2.º Habrá lugar al divorcio, cuando lo pidan ambos conyuges de común acuerdo, o uno de ellas por alguna de las causas determinadas en esta ley, siempre con sujeción a lo que en ella se dispone.

Artículo 3.º *Son causas de divorcio:*

1.º El adulterio no consentido o no facilitado por el conyuge que la alega.

2.º La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercitar cualquiera de los conyuges.

3.º La tentativa del marido para prostituir a su mujer y el conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijos, y la concurrencia en su corrupción o prostitución.

4.º El desamparo de la familia, sin justificación.

5.º El abandono culpable del conyuge durante un año.

6.º La ausencia del conyuge cuando

hayan transcurrido dos años desde la fecha de su declaración judicial, computada conforme al artículo 180 del Código civil.

7.º El atentado de un conyuge contra la vida del otro, de los hijos comunes o los de uno de aquéllos, los malos tratamientos de obra y las injurias graves.

8.º La violación de alguno de los deberes que impone el matrimonio y la conducta inmoral o deshonestas de uno de los conyuges, que produzca tal perturbación en las relaciones matrimoniales, que hagan insostenible para el otro conyuge la continuación de la vida común.

9.º La enfermedad contagiosa y grave de carácter venéreo, contraída en relaciones sexuales fuera del matrimonio y después de su celebración, y la contraída antes, que hubiera sido oculta culpablemente al otro conyuge al tiempo de celebrarlo.

10.º La enfermedad grave de la que por presunción razonable haya de esperarse que en su desarrollo produzca incapacidad definitiva para el cumplimiento de algunos de los deberes matrimoniales, y la contagiosa, contraída antes del matrimonio y culpablemente ocultas al tiempo de celebrarlo.

11.º La condena del conyuge a pena de privación de libertad por tiempo superior a diez años.

12.º La separación de hecho y en distinto domicilio, libremente consentida durante tres años.

13.ª La enajenación mental de uno de los cónyuges, cuando impida su *convivencia espiritual en términos gravemente perjudiciales para la familia* y que excluya toda presunción racional de que aquélla pueda restablecerse definitivamente. No podrá decretarse el divorcio en virtud de esta causa, si no queda asegurada la asistencia del enfermo.

CAPÍTULO II

Ejercicio de la acción de divorcio.

Artículo 4.º Tienen capacidad para pedir el divorcio por mutuo disenso los cónyuges que sean mayores de edad. No se podrá ejercitar este derecho si no han transcurrido dos años desde la celebración del matrimonio.

Artículo 5.º El divorcio, mediante causa legítima, sólo puede ser pedido por el cónyuge inocente, cualquiera que sea su edad.

Artículo 6.º La acción de divorcio se extingue con la muerte de cualquiera de los cónyuges. Sus herederos podrán continuar la demanda o reconciliación deducida por el causante a los efectos del artículo 29.

Artículo 7.º El cónyuge que esté sufriendo la pena de interdicción civil podrá pedir por sí mismo el divorcio, alegando justa causa imputable al otro cónyuge.

Artículo 8.º No se podrá ejercitar la acción pasada seis meses desde que el cónyuge tuvo conocimiento del hecho en que se funda. Tampoco podrá ejercitarse transcurridos cinco años desde que el hecho se realizó, salvo los casos de adulterio, en los que el plazo de la prescripción se fija en diez años, y los de atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los hijos comunes o los de uno de aquéllos, que no prescribirán. Cuando se funde en alguna de las causas cuarta, quinta, sexta, octava, duodécima o diecioctava, podrá ejercitarse la acción mientras subsista el estado de hecho que la motiva. Cuando se funde en la causa número once, será necesario que hayan transcurrido tres años, por lo menos, desde la condena.

Los plazos de prescripción a que se refiere el párrafo anterior no corren mientras los cónyuges vivan separados. Si el cónyuge a quien corresponde la acción de divorcio fuese *reconciliado judicialmente* por el otro para que restablezca la comunidad de vida matrimonial o interponga la demanda, volverán a correr los plazos desde la fecha en que el requerimiento se verifique.

Artículo 9.º La sentencia declarará culpable cuando proceda al cónyuge que hubiere dado causa al divorcio, o a los dos, en su caso.

Artículo 10. La reconciliación pone término al juicio de divorcio. Los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del juez que entienda en el litigio. Cuando la solicitud de divorcio estuviera fundada en mutuo disenso de los cónyuges, la reconciliación impedirá que vuelvan a interponer, sin justa causa, nueva demanda de transcurridos los seis años.

CAPÍTULO III

De los efectos del divorcio

SECCIÓN PRIMERA

De los efectos del divorcio en cuanto a las personas de los cónyuges.

Artículo 11. Por la sentencia firme de divorcio, los cónyuges quedan en libertad de contraer nuevo matrimonio, aunque el culpable sólo podrá contraerlo transcurrido el plazo de un año desde que *fué firme la sentencia*. La mujer, sin embargo, quedará sujeta a la prohibición del número segundo del artículo 45 del Código civil, debiendo empezar a contarse el plazo de los trececientos no días desde la diligencia judicial de separación de los cónyuges. Esta prohibición no regirá cuando el divorcio se haya decretado en virtud de alguna de las causas quinta, sexta, undécima y duodécima, o por mutuo disenso.

Artículo 12. No podrá contraer válidamente nuevo matrimonio el cónyuge que hubiese sido declarado culpable por la causa tercera del artículo 3.º

Artículo 13. Los cónyuges divorciados que no hubiesen celebrado otras nupcias podrán contraer nuevo matrimonio entre sí en cualquier tiempo.

SECCIÓN SEGUNDA

De los efectos del divorcio en cuanto a los hijos.

Artículo 14. La disolución del matrimonio no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos. El Juez fijará la forma en que el padre o madre que no los conserte en su poder deberá contribuir al cumplimiento de aquéllas.

Son aplicables a este supuesto las disposiciones del artículo 33.

Artículo 15. Los hijos conservan todos los derechos y ventajas que les están asegurados por las leyes, por sus padres o por otras personas; pero no podrán ejercitarlos sino en los mismos casos en que podrían hacerlo de no haber mediado el divorcio.

Artículo 16. Disuelto el matrimonio por cualquiera de las causas primera, segunda, novena, décima, undécima y duodécima, o por mutuo disenso, podrán los cónyuges acordar en poder de cuál de ellos han de quedar los hijos comunes menores de edad. Este acuerdo necesitará la aprobación del Juez.

Artículo 17. A falta de acuerdo, quedarán los hijos en poder del cónyuge inocente. Si ambos fueren culpables o no lo fuese ninguno, la sentencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las causas del divorcio y la conveniencia de los hijos, decidirá en poder de cuál de ellos han de quedar, o los mandará proveer de tutor, conforme a las disposiciones del Código civil.

Si la sentencia no hubiere dispuesto otra cosa, la madre tendrá a su cuidado, en todo caso, los hijos menores de cinco años.

Artículo 18. El régimen establecido conforme a los dos artículos anteriores, podrá ser modificado, en virtud de causas graves y en interés de la salud, de la educación o de la buena administración de los bienes de los hijos.

Artículo 19. El cónyuge que hubiere sido privado de los derechos inherentes a la patria potestad, los recobrará a la muerte del otro cónyuge, excepto si hubiera sido declarado culpable del divorcio, fundado en las causas tercera o cuarta, o en el atentado contra la vida de los hijos del matrimonio.

En estos casos podrá recobrarla mediante declaración judicial.

Artículo 20. Aquel de los padres en cuyo poder queden los hijos menores tendrá sobre ellos la patria potestad y, por consiguiente, su representación y el usufructo y administración de sus bienes.

El que no los tenga en su poder conserva el derecho de comunicar con ellos y vigilar su educación en la forma que determine el Juez, quien adoptará las medidas necesarias para asegurar el ejercicio de estos derechos.

Artículo 21. El hecho de contraer segundas o ulteriores nupcias el cónyuge divorciado, en cuya guarda hubieren quedado las personas y los bienes de los hijos por el habido en anterior matrimonio disuelto, no será por sí solo causa para modificar la situación establecida al respecto de dicha prole. Esto no obstante, el Juez podrá determinar lo contrario, a virtud de instancia de parte y cuando, a consecuencia del nuevo matrimonio celebrado por el cónyuge viudo, sobrevengan motivos que racionalmente justifiquen esta resolución. En todo caso en que el segundo o ulterior matrimonio fuere contraído bajo cualquier género de comunidad de bienes, absoluta o relativa, el padre o madre viudo perderán la administración y el usufructo de los bienes de los hijos sometidos a su guarda.

En este supuesto se nombrará judicialmente un gestor del patrimonio de los hijos.

Artículo 22. El plazo de trescientos días que establece el artículo 108 del Código civil empezará a contarse desde la fecha de la diligencia judicial de separación de los cónyuges.

SECCIÓN TERCERA

De los bienes del matrimonio.

Artículo 23. La sociedad conyugal queda disuelta por la sentencia firme de divorcio, en virtud de la cual cada uno de los cónyuges puede exigir la liquidación y separación de sus bienes.

Artículo 24. Tanto el marido como la mujer adquieren la libre disposición y administración de sus propios bienes y de los que por la liquidación de la sociedad conyugal se les adjudique.

Artículo 25. La demanda de divorcio y la sentencia firme en que se decreta se deberán anotar e inscribir respectivamente en el Registro de la Propiedad que corresponda en cuanto a los bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes a la sociedad conyugal.

También se anotará la demanda y se inscribirá la sentencia, en los casos en que proceda, en el Registro mercantil correspondiente.

Artículo 26. Cuando los cónyuges divorciados contrajeran nuevo matrimonio entre sí, volverán a registrarse los bienes por las mismas reglas que antes de la separación, sin perjuicio de lo que durante ella se hubiere ejecutado legalmente.

Antes de contraer el segundo matrimonio harán constar los contrayentes, por escritura pública, los bienes que nuevamente aporte y éstos serán los que constituyan, respectivamente, el capital propio de cada uno.

En el caso de este artículo se reputará siempre nueva aportación la de ~~los~~ ~~bienes~~ ~~ambos~~ ~~en~~ ~~partido~~ en todo sean los mismos existentes antes de la liquidación practicada por causa de divorcio.

Artículo 27. El divorcio no autoriza a los cónyuges para ejercitar los derechos estipulados en el supuesto de la muerte de uno de ellos; pero tampoco les perjudicará para su ejercicio cuando llegue aquel caso, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 28. El cónyuge culpable pierde todo lo que le hubiere sido dado o prometido por el inocente o por otra persona en consideración a éste, y el inocente conserva todo cuanto hubiese recibido del culpable, pudiendo, además, reclamar desde luego lo que éste le hubiese prometido, aunque tales beneficios se hubiesen estipulado con cláusula de reciprocidad.

Artículo 29. El cónyuge divorciado no sucede abintestato a su ex consorte, ni tiene derecho a la cuota usufructuaria que establece la sección séptima del capítulo segundo del título III del libro 3.º del Código civil, ni a las ventajas de los artículos 1374 y 1420 del mismo Código. Si al fallar el causante estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito, si los herederos utilizan la facultad que les concede el artículo 6.º

SECCIÓN CUARTA

De los alimentos.

Artículo 30. El cónyuge inocente, cuando carezca de bienes propios suficientes para atender a su subsistencia, podrá exigir del culpable una pensión alimenticia, independiente de la que corresponde a los hijos que tenga a su cuidado.

Si el divorcio se decretare por causa que no implique culpabilidad de ninguno de los cónyuges, ambos podrán exigirse recíprocamente alimentos en su caso.

Artículo 31. El derecho a los alimentos cesará por la muerte del alimentista o por contraer éste nuevo matrimonio o vivir en concubinato.

La obligación del que haya de prestarlos se transmite a sus herederos, dejando a salvo las legítimas cuando sean herederos forzosos.

Artículo 32. Los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente, según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la situación económica del cónyuge obligado a satisfacerlos.

Artículo 33. El alimentista puede exigir la constitución de hipoteca especial sobre los bienes inmuebles del obligado a dar alimentos, suficiente a garantizar el cumplimiento de la obligación. Si el obligado careciese de bienes propios en que constituir la hipoteca o fuesen insuficientes, el Juez determinará, según las circunstancias, las garantías que haya de prestar.

Artículo 34. El cónyuge divorciado que viniendo obligado a prestar pensión alimenticia al otro cónyuge o a los descendientes, en virtud de convenio judicialmente aprobado o de resolución judicial, y que culpablemente dejara de pagarla durante tres meses consecutivos, incurrirá en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de 500 a 10,000 pesetas. La reincidencia se castigará en todo caso con pena de prisión.

Artículo 35. En lo que no esté previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones del título 6.º, libro 1.º, del Código civil.

CAPÍTULO IV

De la separación de bienes y personas.

Artículo 36. Se puede pedir la separación de personas y bienes sin disolución del vínculo:

- 1.º Por consentimiento mutuo,
- 2.º Por las mismas causas que el divorcio.

3.º Cuando las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación profunda por efecto de la diferencia de costumbres, de mentalidad o de religión entre los cónyuges u otra causa de naturaleza análoga que no implique culpabilidad de uno de ellos.

En este caso podrá pedir la separación cualquiera de los cónyuges.

Artículo 37. El ejercicio de la acción de separación está sujeta a las normas que para la de divorcio establece el capítulo II de esta Ley.

Corresponde al cónyuge inocente optar entre ambas acciones.

Artículo 38. La separación sólo produce la suspensión de la vida común de los casados. En cuanto a los bienes del matrimonio, a la guarda de los hijos y a los alimentos, se estará a lo dispuesto en el capítulo III de esta Ley.

Artículo 39. Se dictará sentencia de divorcio a petición de los dos cónyuges, transcurridos dos años, a contar desde la fecha de la sentencia de separación, y a petición de cualquiera de ellos cuando hubieren transcurrido tres años.

Artículo 40. Por los incapacitados, a tenor del artículo 213 del Código civil, podrá pedir la separación su tutor, con autorización del Consejo de familia. Esta separación no podrá motivar la sentencia de divorcio a que se refiere el artículo 39, sino transcurridos tres años y a petición del cónyuge capaz.

CAPÍTULO V

Del procedimiento de divorcio.

SECCIÓN PRIMERA

Disposiciones generales.

Artículo 41. Será Juez competente para instruir los procedimientos de separación y de divorcio el de primera instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los cónyuges en distintos partidos judiciales, será Juez competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o de la residencia del demandado. Los que no tuvieran domicilio ni residencia fija podrán ser demandados en el lugar en que se hallen o en el de su última residencia, a elección del demandante.

Artículo 42. El Juez examinará de oficio su propia competencia. Son nulos los acuerdos de las partes que alteren lo establecido en el artículo anterior.

Artículo 43. Interpuesta y admitida la demanda de separación o de divorcio, mientras se sustancie el juicio la mujer tendrá capacidad jurídica para regir su persona y bienes, con la limitación de no poder enajenarlos ni gravarlos, a no ser mediante autorización judicial y previa la justificación de necesidad y utilidad.

El marido conservará, si la tuviere, la administración de los bienes de la sociedad conyugal; pero para enajenarlos y gravarlos será necesaria la conformidad de la esposa, y, en su defecto, la autorización judicial.

Artículo 44. Una vez admitida la demanda de separación o de divorcio, el Juez adoptará las disposiciones siguientes, que durarán hasta que termine el juicio por sentencia firme:

1.ª Separar los cónyuges en todo caso.

2.ª Señalar el domicilio de la mujer.

3.ª Poner los hijos menores de cinco años al cuidado de la madre, y los mayores de esa edad, al cuidado del padre.

El Juez podrá, sin embargo, proceder de modo distinto, bien al constituirse el depósito, bien con posterioridad, en virtud de causa justa o por acuerdo de los cónyuges, ratificado a la prevención judicial.

El cónyuge que no tenga en su poder a los hijos tendrá derecho a visitarlos y comunicar con ellos en el tiempo, modo y forma que el Juez determine.

4.ª Señalar alimentos a la mujer, cuando proceda, y a los hijos que no queden en poder del padre, siendo aplicables, en su caso, las sanciones establecidas en el artículo 34.

5.ª Dictar las medidas necesarias para evitar que el marido perjudique a la mujer en la administración de sus bienes, si le correspondiere, o en la de los bienes de la sociedad conyugal.

El marido, como administrador de la sociedad de gananciales, vendrá obligado a abonar "estas expensas" a la mujer, salvo cuando ésta posea bienes propios suficientes y disponga de sus productos.

Para la ejecución de las disposiciones a que este artículo se refiere y para sustanciar las cuestiones e incidencias que puedan promoverse como consecuencia de las mismas, se formarán las correspondientes piezas separadas, a fin de no entorpecer en ningún caso la prosecución del asunto principal.

Artículo 45. Cuando se solicite la defensa por pobre, tanto por el actor como por el demandado, se sustanciará este incidente en pieza separada, sin detener ni suspender el curso del pleito principal, cuyas actuaciones se practicarán provisionalmente sin exacción de derechos.

SECCIÓN SEGUNDA

Del procedimiento de separación y de divorcio por causa justa.

Artículo 46. Las demandas de separación y de divorcio se sustanciarán por los trámites procesales que fija la ley de Enjuiciamiento civil en su libro II, título II, capítulo 3.º, salvo las modificaciones que establezca esta Ley. Para interponer la demanda no será necesario intentar previamente la conciliación. El plazo para comparecer y contestar a la demanda y proponer, en su caso, la reconvenición será de veinte días.

Artículo 47. Entre los documentos que deben acompañar a la demanda figurarán los que justifiquen el domicilio conyugal o, en su caso, la residencia.

Artículo 48. El Ministerio fiscal será parte en el juicio principal y en todas sus incidencias sólo cuando existan menores, ausentes o incapaces, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 165 del Código civil.

Artículo 49. Las partes deberán comparecer asistidos de Procurador que las represente y de Abogado que

los dirija. La demanda se reducirá según las normas establecidas en la ley de Enjuiciamiento civil.

Artículo 50. Si se hubiere formulado reconvencción, el actor contestará dentro del plazo improrrogable de diez días. No se admitirá reconvencción que no estuviere fundada en alguna de las causas establecidas en el artículo 3.º

Artículo 51. La confesión y el allanamiento a la demanda no bastarán por sí solos para fundamentar una sentencia condenatoria.

Los parientes y los domésticos de los esposos pueden ser oídos como testigos.

Artículo 52. La resolución en que se reciba el pleito a prueba prevendrá a las partes que propongan toda la que les interese en el término improrrogable de diez días.

El término para la práctica de las pruebas no podrá exceder de veinte días.

Artículo 53. Cuando alguno de los litigantes proponga prueba en los dos últimos días del período, tendrán derecho las demás partes a proponer, a su vez, prueba sobre los mismos extremos, dentro de los dos siguientes a la notificación de la providencia en que aquella sea admitida.

Artículo 54. Cerrado el período de prueba, procederá el Juez, dentro de los diez días siguientes, a hacer un resumen razonado de las practicadas y un informe sobre la cuestión de derecho.

Artículo 55. Cumplido el trámite del artículo anterior, se remitirán los autos a la Audiencia provincial, con emplazamiento de las partes, por término de diez días.

Recibidos los autos en la Audiencia y transcurrido el término del emplazamiento, háyanse o no personado las partes, se pondrán de manifiesto las actuaciones para instrucción, por término de cinco días improrrogables, a cada una de las personas, y se pasarán por igual término para instrucción, al Magistrado ponente.

Transcurrido este plazo, se dictará providencia, declarando concluso el pleito, con citación de las partes para sentencia y se señalará día para la vista dentro de los ocho siguientes.

El día anterior al señalado para la celebración de la vista se entregará a cada uno de los Magistrados que hayan de formar la Sala una copia del informe hecho por el Juez, con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 56. Los Jueces y Tribunales podrán disponer de oficio o a instancia de parte que el despacho y la vista se hagan a puerta cerrada, cuando así lo exijan la moral y el decoro, la naturaleza de la causa de separación o de divorcio.

Artículo 57. Contra la sentencia se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo por alguna de las causas siguientes:

- 1.º Incompetencia de jurisdicción.
- 2.º Violación de las formalidades esenciales del juicio cuando hubiere producido indefensión.
- 3.º Injusticia notoria.

El recurso se interpondrá y formalizará mediante escrito presentado ante la Sala que hubiere dictado la sentencia, dentro del término improrrogable de diez días, contados desde el siguiente al de su notificación. Transcurrido este plazo, se remitirán los autos al Tribunal Supremo, emplazándose a las partes para que comparezcan en término de diez días. Este término será de quince días para los pleitos procedentes de las islas Baleares y de veinte para los de las islas Canarias. Recibidos los autos y personado el recurrente, se mandarán traer a la vista, previa instrucción de las partes y del ponente, por término de cinco días a cada uno, señalándose la vista dentro del mes siguiente. Celebrada ésta, se dictará sentencia en plazo de diez días.

Artículo 58. El Juez de primera instancia podrá, en cualquier estado del pleito, adoptar provisionalmente las medidas de urgencia que considere indispensables respecto de las personas y bienes de los cónyuges y de sus hijos, conforme a las disposiciones de esta Ley.

Artículo 59. Cuando el demandante acompañe copia fehaciente de sentencia firme en que aparezca su consorte condenado por hechos de los señalados con los números 1, 2, 7 y

II del artículo 3.º de esta Ley como causas de divorcio, el Juez dará traslado al demandado, y si éste no conviniese ni alegase excepción suficiente a desvirtuar la acción, o no compareciere, citará sin más para sentencia ante la Audiencia, una vez oído el Ministerio fiscal.

Artículo 60. *Oblenida una sentencia de separación y transcurrido el tiempo a que se refiere el artículo 39 sin que hubiere mediado reconciliación, los cónyuges podrán solicitar la declaración de divorcio, y el Juez, probados estos extremos, citarán sin más a las partes, para sentencia, ante la Audiencia correspondiente.*

Artículo 61. Los recursos de apelación que se establecen contra resoluciones de los Jueces de primera instancia en esta materia, serán admisibles en un solo efecto y se tramitarán ante la Audiencia provincial respectiva.

Artículo 62. Las costas del pleito serán a cargo del litigante vencido salvo los casos en que el Tribunal, por motivos fundados, dispusiere otra cosa en la sentencia.

SECCIÓN TERCERA

Del procedimiento de separación y de divorcio por mutuo disenso.

Artículo 63. En los casos de separación o de divorcio por mutuo disenso, los cónyuges deberán comparecer ante el Juez competente, en la forma prevenida en el artículo 49.

Artículo 64. Se levantará acta de la comparecencia y de las manifestaciones hechas por los interesados.

Dentro de los tres días siguientes citará a nueva comparecencia a cada uno de los esposos, separadamente, e investigará, mediante un interrogatorio escrupuloso, la existencia de una auténtica y sincera voluntad de separación o de divorcio, e invitará a las partes a ratificarse.

Artículo 65. Ratificados los cónyuges, el Juez decretará su separación y adoptará las disposiciones provisionales relativas a las personas y bienes de los mismos y de los hijos, y pensiones alimenticias en su caso, conforme a los convenios de los interesados que aprobare y, en su defecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley. De todo cito se levantará acta, que será firmada por el Juez, por los cónyuges y por el actuario.

Artículo 66. Si se hubiere pedido la separación, se decretará desde luego después de la ratificación.

En caso de haberse solicitado el divorcio, el Juez citará a las partes a nueva comparecencia, seis meses después, para que manifiesten si persisten en su propósito de divorciarse.

Artículo 67. *Transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo anterior, si los interesados se ratifican en su voluntad de divorciarse, se levantará acta circunstanciada de las manifestaciones hechas, que firmarán los cónyuges, y se los citará para nueva y última comparecencia seis meses más tarde. Si los cónyuges comparecen esta tercera y última vez y manifiestan su voluntad definitiva de divorciarse, el Juez decretará el divorcio por mutuo disenso y adoptará las medidas oportunas respecto de los hijos, del cónyuge, en su caso, y de los bienes, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.*

Artículo 68. La falta de asistencia sin justa causa a alguna de las comparecencias a que se refiere el artículo anterior se interpretará como desistimiento y producirá la nulidad de lo actuado.

Artículo 69. Las sentencias firmes de divorcio se comunicarán de oficio al Registro civil en que conste la celebración del matrimonio y a aquel en que radiquen las inscripciones de nacimiento.

REGLAS TRANSITORIAS

1.º Mientras no se modifiquen los Aranceles, los derechos que devenguen los Secretarios de los Juzgados, Audiencias y Tribunal Supremo no podrán exceder de 200, 150 y 300 pesetas, respectivamente, estando en dichas cantidades incluidos los derechos de los Oficiales de Sala.

Los derechos que devenguen los Procuradores serán sólo de 175 pesetas en el Juzgado, 125 pesetas en la Audiencia y 200 pesetas en el Tribunal Supremo.

Durante la sustanciación del juicio en el Juzgado de primera instancia, se entenderá dividida la tramitación en dos periodos iguales, desde la demanda al recibimiento a prueba y desde este momento hasta la remisión de los autos a la Audiencia.

Si durante la tramitación del asunto en la Audiencia o en el Tribunal

Supuesto se desistiere del asunto o se reconciliaran los cónyuges, se devengarán por los Secretarios y por los Procuradores los derechos que marquen sus respectivos aranceles, siempre que no excedan de los antes fijados, que no podrán ser superados en ningún caso.

Los incidentes solo darán derecho a percibir a los Secretarios y Procuradores la mitad de los que, por cada caso, marquen sus respectivos aranceles.

2.ª Podrá ejercitarse la acción de divorcio o de separación aunque el hecho en que se funde conforme a esta Ley se hubiere realizado antes de su promulgación.

3.ª Los cónyuges que al promulgarse esta Ley estuvieren separados temporalmente por sentencia firme a la que el Código civil reconocía efectos civiles, podrán pedir que la separación se convierta en divorcio, conforme a lo dispuesto en el artículo 39. Podrán pedir asimismo el divorcio por mutuo disenso o alegando justas causas, comprendida en el artículo 3.ª, aunque sea la misma que hubiese motivado la separación.

4.ª Las sentencias dictadas por los Tribunales eclesiásticos en pleitos de divorcio con anterioridad al Decreto del Gobierno de la República sobre esta materia de 4 de Noviembre de 1931 y que hayan obtenido en su día la oportuna validez civil, no necesitarán de nuevas ratificaciones para su total eficacia, siempre que el litigio hubiere sido de divorcio perpetuo o indefinido.

Las dictadas con posterioridad a dicho Decreto no producirán efectos civiles.

Los pleitos de divorcio fallados por los Tribunales eclesiásticos con posterioridad a la fecha indicada y antes de la vigencia de la presente Ley, para surtir efectos, deberán ser sometidos a revisión del Tribunal civil competente, pudiendo estimarse por éste las causas consignadas en la presente Ley y decretarse el divorcio vincular que la misma establece.

Los Tribunales civiles podrán conceder valor y eficacia a las pruebas practicadas ante el Tribunal eclesiástico cuando a su juicio hayan merecido las debidas garantías para los litigantes.

Las pruebas practicadas en los pleitos pendientes ante los Tribunales eclesiásticos en que éstos no hayan dictado sentencia firme en la fecha de

la promulgación de la presente Ley, podrán ser tomadas en cuenta por los Tribunales civiles, en los términos que previene el párrafo anterior, cuando dichos litigios sean sometidos a la jurisdicción de estos Tribunales.

5.ª En los juicios pendientes ante los Tribunales civiles al tiempo de la promulgación de esta Ley, cualquiera que sea su estado, se dará traslado al actor para que, en el término de diez días, manifieste si opta por el divorcio vincular que en ellas se nega. Si así fuese, deberá incoarse nuevamente el procedimiento y subsanarse conforme a las disposiciones de la sección segunda del capítulo V. Si el actor optare por la continuación del pleito se sustanciará con sujeción a los trámites ordenados en esta Ley. La sentencia en este caso será de separación y tendrá los efectos que previenen los artículos 33 y 39.

Queda a salvo el derecho de los cónyuges para obtener el divorcio por mutuo disenso.

6.ª Cuando hubiere separación de los bienes de los cónyuges decretada conforme al capítulo 6.ª, título III, libro 4.º del Código civil, por causa de divorcio, si el marido hubiera conservado la administración de los bienes del matrimonio, la mujer podrá exigir que se liquiden y se la entreguen los bienes propios y los que la correspondan de la sociedad conyugal. En cuanto a ellos, se observará lo dispuesto en el artículo 24. Entre los cónyuges regirá en este caso lo que se dispone en la sección cuarta del capítulo III de esta Ley.

7.ª Los plazos de caducidad de la acción del artículo 8.º de esta Ley comenzarán a contarse desde la promulgación de la misma.

DISPOSICION FINAL

Quedan derogadas cuantas disposiciones y pactos se opongan a los de la presente Ley.

Por tanto:

Mando a todos los ciudadanos que conculquen al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid a dos de Marzo de mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Justicia,

ALVARO DE ALBORNIZ Y LOBONIANA

6. - Instrucción Pastoral. - El Matrimonio Civil.

BOE de Segovia, año 77, 30 de marzo de 1932, núm. 5, págs. 137-163.

Venerables hermanos y amados hijos en J. C. N. S.

Tan irritantes son los atropellos y tan múltiples y desbozados los ataques, que en pocos meses se han dirigido, desde las alturas del poder público y desde el alcázar soberano del Parlamento, contra la conciencia católica del país y contra los más sagrados intereses de la religión y de la Iglesia, que, afligido y conturbado el ánimo a la vista de tanta saña e iniquidad, no podemos sofocar en la garganta la voz de encendida protesta por tan notorios desafueros y sacrílegos agravios, y mucho menos podemos inhibirnos, sin traicionar altísimos deberes, de exponer a los católicos la doctrina verdadera y perenne, señalándoles de paso las normas que han de regir su conducta en la presente tristísima situación.

Con precisa minuciosidad exponen los obispos la serie de tales violaciones en la hermosa *Carta colectiva*, que hace poco se leyó en todas las iglesias de la Diócesis, y aun de España; y con firme y serena libertad de espíritu formularon su pensamiento y su actitud ante semejante cúmulo de ultrajes a la religiosidad y creencias de la mayoría inmensa, más palpable cada día, de los españoles, y a los derechos sacrosantos y venerandos de Dios y de la Iglesia. Pero los llamados a rectificar el siniestro rumbo de tantas vejaciones, en vez de darse a partido y atender las quejas y demandas inspiradas en el más noble deseo de paz y de justicia, arriesgan en el ataque, y van ahondando las heridas del catolicismo español con el despiadado instrumento de las leyes reguladoras de los preceptos constitucionales, en las que se destila el veneno de laicismo e irreligiosidad que se quiere extender a todas las manifestaciones de la vida, y contra las cuales deber nuestro ineludible es luchar denodadamente, por todos los medios legítimos y honestos, hasta conseguir su derogación, en pro del bien común, en descargo de nuestra conciencia, y en defensa de los sagrados intereses espirituales que la divina Providencia nos ha encomendado.

No vamos a hacer disección severa de todas y cada una. Siguiendo el plan que os anunciamos en fecha reciente, hoy toca el turno a una de ellas, indispensable para dar cumplimiento al artículo 43 de la Constitución, tan infausta y preñada de gravísimos peligros para la sociedad y para las almas como pocas, y vejatoria y odiosa como la que más,

por atentar contra la soberanía espiritual de la Iglesia y constituir una invasión inicua en terrenos de la exclusiva competencia de la misma. Es la que se refiere al matrimonio, que por virtud de la ley del divorcio quedará profanado en su santidad, y rebajado al nivel bochornoso de función meramente reproductiva de la especie.

Y ved ahí, Venerables Hermanos y amados hijos, lo que nos da pie para tratar en este pastoral mensaje la doctrina católica sobre el santo sacramento del matrimonio. Materia abundantísima, que no nos proponemos desarrollar en toda su amplitud y bajo todos sus aspectos, sino exponer tan sólo, para conocimiento y dirección de los fieles, en sus líneas culminantes,

y sobre todo en lo que se relaciona
con el matrimonio civil,

comoquiera que este sea uno de los puntos más atacados por las impías y absurdas disposiciones de la novísima constitución española y por la ley complementaria, a que aludimos.

Seguiremos para ello, y de continuo citaremos, la doctrina infalible de León XIII en su encíclica *Arcanum*, y más aún los trazos luminosos que destellan con fulgurantes clarividencias en la encíclica *Castí connubii*, donde nuestro Santísimo Padre el Papa Pío XI ha descrito con mano maestra un cuadro grandioso, en el que se destacan, junto a las sombras del error y del vicio, y cobran mayor relieve y resaltan con más claridad, las serenas e incommovibles enseñanzas de la Sede Apostólica sobre el matrimonio.

De la transcendencia inmensa y sumo interés que para todos encierra este tema, fácilmente os daréis cuenta cabal, si reparáis que el matrimonio no sólo es manantial de vida para los individuos todos que a la vida vienen, sino a la vez piedra angular en que descansó la familia, y por tanto la sociedad entera, y altísima institución decretada y establecida, no por la Iglesia ni por los hombres, sino directamente por el mismo Dios, y fuente copiosa de bienes para las almas y para la pública prosperidad.

Por eso es de la mayor importancia, según lo hace constar el Papa, que se instruya lo mejor posible a los fieles en esta parte; y esto de palabra y por escrito, no rara vez y por encima, sino a menudo y sólidamente, con razones profundas y claras, para conseguir, de este modo, que estas verdades rindan las inteligencias, y penetren hasta lo íntimo de los corazones».

Y ante todo, es digno de notarse, y vale la pena consignarlo, que en todo matrimonio, aun en el matrimonio de los gentiles y paganos, hay algo de sagrado, algo de misterioso, algo así como una irradiación de sobrenatural y oculto sentido, que infunde respeto y eleva su rango, por cima de los convenios humanos y humanas estipulaciones, a una esfera singularmente reverencial, inviolable, temerosa y santa.

Nunca, en efecto, fué considerado el matrimonio, en país alguno, como un contrato meramente humano; nunca estuvo recluido en los gredaños del orden puramente natural. Siempre, desde los días del Paraíso, fué mirado como una institución de carácter eminentemente religioso;

siempre ha contado, a través de
los tiempos,
entre las grandes oruaciones
protegidas y sancionadas
por la divinidad

Y no es que las naciones se hayan confabulado, ni pueblo alguno haya pactado de antemano para incluirlo entre los ritos y ceremonias de su religión y de su culto. Es tan sólo que, incrustado, por decirlo así, en las mismas entrañas del connubio legítimo, han visto las gentes, sin excepción, un símbolo augusto, un destello representativo de arcanas realidades, algo, en una palabra, como afirma León XIII, de venerable y de sagrado, «no adventicio sino ingénito, no procedente de los hombres sido innato, puesto que el matrimonio tiene a Dios por autor, y fué desde el principio una figura y como vislumbre de la Encarnación del Verbo de Dios» (1).

Así es, ciertamente. A la sola luz de la razón natural, y mucho mejor si se investigan los vetustos monumentos de la historia, si se pregunta a la conciencia constante de los pueblos y se consultan las costumbres de todas las gentes, consta de modo indubitable que implica y entraña el matrimonio,

aun el matrimonio gentil, o sea, de las
no bautizadas, un fondo y significado
marcadamente religioso

que le viene ya de su origen divino, ya de su fin, que es el de engendrar y educar hijos para el cielo y unir con Dios

(1) Encicl. Arcanum, 10 Febrero 1880.

a los cónyuges mediante un amor mutuo y cristiano, ya finalmente del mismo natural oficio del matrimonio, establecido para ser algo así como el arceduz o vehículo de la vida y una participación de la fecundidad propia de Dios, y para colaborar en cierto modo a la creación del alma espiritual.

Por eso, todos los fundadores de religiones, Brahma, Zoroastro, Confucio, Buda, y todos los jefes de tribus erráticas y salvajes, han reconocido la índole sagrada y carácter sobrehumano del matrimonio, y lo han revestido y celebrado con solemnidades rituales y simbólicas ceremonias, mediando la autoridad de sus pontífices y el ministerio de sus sacerdotes, y lo han puesto, lo mismo que la familia, bajo la tutela y sanción inmediata de los dioses, como acto el más transcendental y decisivo de la vida. En Grecia y Roma, los celtas y los iberos, y todas las razas y todos los pueblos, con leves diferencias, lo festejaban sacrificando a los lares de la familia de la mujer en la casa de esta, y nuevamente sacrificando a los lares de la familia del marido al ser aquella conducida en triunfo a la casa de este.

Pero esta índole sagrada y carácter religioso, proveniente de su institución divina y de su doble analogía profética con el misterio de la Encarnación y con la Iglesia, Esposa inmaculada del Cordero, es común, y lo ha sido siempre, al matrimonio en todas sus fases y en todas las épocas de la historia, y se aplica y ennoblece de igual modo al matrimonio antes de Jesucristo y después de Jesucristo, al matrimonio de los judíos bajo la ley mosaica y al matrimonio de los cristianos bajo la ley de gracia, y al matrimonio de los infieles bajo la ley natural: conviene igualmente a todo matrimonio legítimo y verdadero. Todo matrimonio legítimo y verdadero es hoy día, y será siempre, como siempre fue, un contrato familiar sagrado, tipo y representación de las bodas inefables del divino Verbo con la naturaleza humana, y del conyugio místico de Cristo con su Esposa, la Iglesia inmaculada.

Ahora bien: el matrimonio cristiano, es decir, el matrimonio en la Iglesia católica, o también el matrimonio entre bautizados,

posee una dignidad sin comparación
más sublime,
un tinte de honor más soberano,
una excelencia mucho más preciada y más valiosa:
es verdadero sacramento.

Y como tal, confiere a los cónyuges, que dignamente lo reciben, el don inestimable de la gracia santificante: y múltiples auxilios sobrenaturales para cumplir como es debido las múltiples obligaciones de su nuevo estado.

Del Corazón alanceado de Cristo, fuente original de gracia y de virtudes infusas, brotan irrestañablemente, y se derivan a las almas siete copiosísimos raudales de celestes aguas, que surgen hasta la vida eterna, y hacen a los hombres hijos adoptivos de Dios y herederos de la felicidad

inenarrable de los santos. Son los siete sacramentos de nuestra religión, instituidos, fundados, establecidos por el mismo Jesucristo en persona y con toda la autoridad y poder soberanos, que, como legado de Dios para implantar la economía de la ley de gracia y redimir al género humano, le correspondían y le eran propios.

Uno de estos sacramentos
es el matrimonio.

Verdad indubitable, verdad incontrovertible, verdad suprema: como que es uno de los dogmas de nuestra fe. Quien lo negare a sabiendas y pertinazmente, cometería pecado gravísimo de infidelidad; sería hereje. *Si alguno dijere, pronuncia el Concilio ecuménico de Trento, que el Matrimonio no es verdadera y propiamente uno de los siete sacramentos de la Ley Evangélica, instituido por Cristo nuestro Señor, sino inventado por los hombres en la Iglesia, y que no confiere gracia, sea anatema.*

Esta es la prerogativa más escelsa, el bien más codiciable del matrimonio. Ahí radica su primacía y sublimidad eminente; en esto se diferencia el matrimonio cristiano del matrimonio fuera de nuestra religión, fuera del cristianismo.

Por eso, como lo hace notar el Sumo Pontífice, nada tiene de extraño que veamos a los enemigos del mismo impugnar ante todo y con mayor saña su excelencia sacramental. «Afirman en primer lugar ser el matrimonio un asunto del todo natural y exclusivamente profano, el cual en modo alguno ha de ser encomendado a la Iglesia de Cristo, sociedad religiosa, sino tan sólo a la sociedad civil o Estado, añadiendo que es preciso eximir el contrato matrimonial de todo nudo perpetuo, de todo vínculo indisoluble..., con lo cual el matrimonio, despojado de toda santidad, quedará replegado al número de las cosas profanas y seculares (1)

...[Inútil razonar y vano esfuerz!] Todas las cavilosas argerías y sofismas de la impiedad y del error no conseguirán nunca oscurecer el cielo espléndido de las católicas enseñanzas, ni prevalecerán nunca contra la doctrina revelada por Dios y apoyada en la Iglesia, columna y fundamento de la verdad. De igual modo razonaron y se esforzaron los protestantes en el siglo XVI..., y fueron desmentidos, y fueron derrotados por el oráculo supremo y custodio infalible de la cristiana revelación. Sus nietos auténticos, los racionalistas liberales del siglo XX, no han de ser más afortunados; como no son más inventivos, ni más audaces, ni más sabios.

(1) *Encicl. Casti connubii*, 31 Diciembre 1930.

Verdadera y propiamente sacramento
de la Ley Evangélica, manantial de
gracia divina, que santifica a los cónyuges

y les confiere abundancia de espirituales energías para la guarda de sus deberes mutuos, es el matrimonio de los cristianos, según lo han proclamado y creído y practicado las Iglesias de Oriente y Occidente desde los tiempos apostólicos y lo han definido con reiterada insistencia los Sumos Pontífices en multitud de indiscutibles y luminosísimos documentos.

Ni solamente sabemos que así es, sino que además nos consta con toda certeza el conducto por donde se nos ha transmitido y ha llegado hasta nosotros esta doctrina consoladora, ya que la tradición histórica, desde los orígenes del cristianismo, nos advierte y persuade que el matrimonio lleva consigo una santidad y una eficacia sobrenaturales, y que Jesucristo lo ha renovado y transformado, en virtud de su autoridad incommunicable y suprema, convirtiéndolo en causa productiva de la gracia santificante y ennobleciendo de ese modo la unión conyugal entre los hombres.

Por otra parte, las enseñanzas de la Sagrada Escritura

no pueden ser más perentorias
ni más claras en esta materia.

Hay, con efecto, en las Epístolas de San Pablo un pasaje bellísimo, y no menos célebre, que no podemos desarrollar ampliamente en los angostos límites de una Instrucción Pastoral, pero cuyos puntos culminantes y conclusión final tampoco podemos omitir del todo.

Dice así el Apóstol, hablando del matrimonio en su carta a los fieles de Efeso: *Las casadas estén sujetas a sus maridos, como al Señor; por cuanto el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; que es su cuerpo, del cual él mismo es Salvador. Por tanto, así como la Iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres lo han de estar a sus maridos en todo. Vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia, y se sacrificó por ella para santificarla, purificándola por el bautismo de agua con la palabra de vida. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Quien ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie ciertamente aborreció jamás a su propia carne; antes bien la sustenta y cuida, como lo hace Cristo con la Iglesia. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará con su mujer, y serán los dos una carne. Grande es este misterio y el símbolo que encierra con respecto a Cristo y a su Iglesia. (1).*

Magnífica y sobre todo encarecimiento aleccionadora

(1) Ad Ephes. I, 22-32.

y estimulante páginal ¿Cuál es la enseñanza dogmática que de ella rebosa a todos luces, y se desprende con meridiana claridad?—Que el matrimonio cristiano,

es fuente de gracia sobrenatural
para los contrayentes,
es verdadero sacramento.

El Apóstol enseña expresamente que el matrimonio cristiano, por la unión recíproca y compenetrada con que junta y unifica a los legítimos esposos, es un tipo y figura del consorcio inefable entre Cristo y la Iglesia, que no puede ser ni más perfecto, ni más encumbrado, ni más santo. Por otro lado, así los Padres como los Doctores y los Sumos Pontífices han visto simbolizada y analógicamente diseñada en el matrimonio la unión personal, irrompible, divina, del divino Verbo con la naturaleza humana en el tálamo florido y purísimas entrañas de María Virgen.

Y ¿cómo podría el matrimonio simbolizar y reflejar las bodas de Cristo con su cuerpo místico, la Iglesia, que se verifican y se regulan por la caridad y amor más acendrado y más puro, más celestial y más estable..., y figurar y representar las bodas del divino Verbo con la humana naturaleza, que se realizan y se consuman entre avenidas indescriptibles de luz, de gracia y de santidad... ¿cómo podría el matrimonio cristiano semejar y reproducir tan altos misterios, si no fuese en sí mismo un vínculo sobrehumano, un principio de amor divino, un foco generoso de gracia santificante, un surtidor perenne de vida sobrenatural, por cuyo influjo el amor divino, la gracia santificante y la vida sobrenatural se comuniquen, digámoslo así, del uno al otro cónyuge, como de Cristo se comunican a la Iglesia, y del Verbo a su santa humanidad? ¿Cómo podría la familia, fundada sobre la base del matrimonio, contrato real y simbólico a la vez, atesorar y poseer tantas semejanzas, teóricas y prácticas, con el misterio de la Encarnación y con la obra de la Redención, si no perteneciese de lleno el matrimonio a la categoría de las causas sobrenaturales engendradoras de gracia santificante, si no fuese real y propiamente sacramento?

Para este fin de dignificar
y ennoblecer la unión conyugal

están acordes los Santos Padres en afirmar que acudió Jesucristo a las bodas de Caná: «Para ratificar la honestidad y licitud de las mismas, dice San Agustín, y poner de manifiesto la verdad del sacramento» (1). Y San Cirilo de Alejandría escribe que se presentó en ellas «no tanto para sentarse al banquete, como para hacer un milagro y santificar en su origen y fundamento la generación carnal del hombre. Porque convenía, en efecto, que el que debía renovar la naturaleza humana y levantarla a un estado de más ilustre perfección, no solamente bendijese y consagrarse a los

(1) In Joann., tr. IX, 2; P. L., t. XXXV, col. 1450.

que ya gozaban de la vida, sino que además dispusiese y preparase su gracia a los que habían de venir al mundo en adelante, y santificase por adelantado su nacimiento» (2).

Aún más explícitamente distingue San Agustín en otro lugar el matrimonio de los gentiles, que sólo constituye un contrato, del matrimonio entre los cristianos, al que llama «sacramento de la Nueva Ley, por el cual el hombre y la mujer bautizados se entregan y se aceptan el dominio mutuo de sus cuerpos» (3). Y San Crisóstomo considera el matrimonio como un sacramento que debe recibirse con santas disposiciones, para que comunique a los casados las gracias necesarias en su nuevo estado (4).

Cierto que no dicen literalmente que el matrimonio es signo eficaz de la gracia, o que produce instrumentalmente la gracia que significa. Imposible que hablasen con la precisión de lenguaje, que hoy se usa en las escuelas. Pretender de ellos tal cosa, sería incurrir en deplorable y ridículo anacronismo.

Pero si han creído y enseñado los Santos Padres, y esto es lo que importa y hace el caso,

que la gracia riega y se confiere
a los esposos;
que la gracia fundamenta su unión

y garantiza la estabilidad y firmeza de la misma; que la gracia es la respuesta y como el pago de Dios a la confianza de los que se casan conforme a sus designios y según su ordenación divina. Tertuliano nos dice de esta gracia que es «una defensa, un resguardo contra los males que amenazan a los cónyuges, y una prevención contra los abusos

(2) In Joan., II, 1, 2: P. G. t. LXXII, col. 224.

(3) De bono conjugali, c. 2^a.

(4) Homil. 56.

a qué están expuestos» (1). Y Orígenes enseña que «Dios mismo los asocia y los une, y que por esta razón la gracia desciende sobre ellos y permanece en ellos» (2).

Dios presidiendo la entrega mutua
de los contrayentes;
Dios bendiciéndola complacido

para hacerla irrevocable; Dios asegurando de antemano a los cónyuges la gracia que han menester para guardarse fidelidad..., tal es el concepto del matrimonio cristiano en los tratados y lucubraciones apologéticas y didácticas de los Padres: concepto, que representa y acusa un progreso notable, si le comparamos con los textos de la Escritura, los cuales sólo de una manera implícita nos proponen y contienen la idea de la gracia. De ahí a la doctrina teológica y literatura o exposición de los grandes maestros escolásticos en materia sacramental, no hay más que un paso, que si para nosotros encierra no pequeño interés histórico, porque sería dato precioso para fijar el desarrollo del dogma, no tenía ningún alcance, ni revestía importancia ninguna para los esposos, a quienes precisamente los Santos Padres trataban de aleccionar en sus obligaciones. En el fondo y en la sustancia su persuasión y su creencia concuerdan totalmente con la creencia y persuasión de todos los católicos en todos los tiempos sobre la verdad de este sacramento.

Así se explica que los primitivos cristianos celebrasen el matrimonio como un acto esencialmente religioso,

como quien recibe un sacramento,
y con intervención, a ser posible,
de la Iglesia.

según se infiere claramente de la manera de expresarse de Tertuliano.

Lo que caracteriza, en su sentir, al matrimonio cristiano, es que la Iglesia es quien lo anuda, y la bendición del sacerdote la que lo sella sobre la tierra al mismo tiempo que el Altísimo lo ratifica en el cielo. En su tratado sobre la *monogamia*, uno de los argumentos que aduce para disuadir las segundas nupcias a su mujer, es este: «Cómo podrías contraer segundo matrimonio, cuando aquellos a quienes habrías de pedirlo, sólo una vez pudieron casarse,

(1) Ad Uxor., II, 7: P. L. t. I, col. 1299.

(2) Comm. in Matth., XIV, 16: P. G., t. XIII, col. 1230.

según San Pablo? (1). Es decir, que a los sacerdotes pedían que les administrasen el matrimonio, y los sacerdotes los casaban.

Así se explica también lo que de otra manera no tiene congruente y satisfactoria explicación: que las Iglesias orientales, los armenios, los jacobitas, los coptos y demás ramas nestorianas, eutiquianas y monofisitas, separadas de Roma en el siglo V, llevasen como depósito santo y tradicional el sacramento del matrimonio en sus libros litúrgicos, no obstante la profunda y constante aversión, que siempre sintieron y fomentaron, más aún en sus principios, contra la Iglesia Romana.

Es que tenían esta doctrina como recibida de la antigüedad, como depósito sagrado contenido en la revelación primitiva del cristianismo, como verdad enseñada directamente por el Salvador o por los Apóstoles, y transmitida de boca en boca y de generación en generación por todo el curso de los siglos.

Demos fin a este punto resumiendo en breves palabras la conclusión que de todo lo expuesto se desprende, a saber: *Que el matrimonio de los cristianos es cosa sagrada y de las más sagradas de nuestra Religión; es verdadera y propiamente sacramento establecido para santificar a los cónyuges y darles derecho a gloria imperecedera en el cielo.*

II

Consecuencia inmediata e irrecusable de la elevación del matrimonio a la categoría de sacramento es la regulación exclusiva del mismo por la autoridad eclesiástica, sin que ningún poder de la tierra pueda someterlo a su competencia, y mucho menos legislar sobre sus elementos constitutivos, sobre su íntima naturaleza y esenciales propiedades.

Solamente a la Iglesia por él fundada plugo a Jesucristo entregar, y entregó con efecto Jesucristo, el cuidado de las cosas sagradas, y su reglamentación y forma extrínseca de validez.

(1) C. XI, P. I, t. II, col-943.

Ahora bien: el matrimonio, investido y avalorado con la dignidad excelsa de sacramento, no sólo cuenta entre las cosas sagradas, sino también entre las creaciones genuina y totalmente sobrenaturales.

Sabidamente a este propósito escribe Pío VI: «Es un dogma de nuestra santa fe, que el matrimonio, el cual antes de la venida de Jesucristo no era sino un contrato natural, ha pasado a ser después de la venida de Jesucristo uno de los siete sacramentos de la Ley Evangélica instituidos por el mismo Cristo nuestro Señor. De ahí nace

que sólo la Iglesia tenga potestad
para determinar la forma del susodicho
contrato, así elevado a la dignidad de
sacramento.

Porque sólo a ella fué conferida y puesta en las manos toda la economía, y todo el régimen y decoro de los sacramentos». (1)

O, como dice con igual acierto León XIII: «Siendo el matrimonio por su misma naturaleza, y por su esencia, una cosa sagrada, natural es que las leyes por las cuales debe regirse y temperarse, sean puestas por la divina autoridad de la Iglesia, que es la única que tiene el magisterio de las cosas sagradas, y no por el imperio de los príncipes seculares» (2).

Y ved ahí que entramos de lleno en lo que llaman, con estrafalario y feo nombre, *matrimonio civil*, «inventado por hombres que, ayudados y empujados por el enemigo de las almas, se empeñan en repudiar y en desconocer totalmente la renovación y perfección del matrimonio, así como desprecian ingratamente los demás beneficios de la redención» (2).

¿Qué es en pocas palabras, el matrimonio civil?—Es el matrimonio celebrado a espaldas de la Iglesia, sin la presencia de sacerdote alguno que haga sus veces, y con la sola intervención y el sólo pasaporte o visto bueno de un funcionario del Estado, instituido y ungido, pero sin óleo ni crisma, para el caso por la autoridad civil, que no reconoce efectos legales a ningún otro matrimonio, y descarta del mismo por completo todo elemento religioso.

Nada de Iglesia que santifique la unión; nada de ministro eclesiástico que la bendiga y la sobrenaturalice en representación de Jesucristo; nada de oraciones y signos de la cruz para impetrar la protección del Altísimo sobre los desposados. Un despacho administrativo, que lo mismo puede ser una lonja de contratación o un departamento

(1) Brev. ad Episc. Motul., 16 Setiembre de 1788.

(1) Encicl. *Arcanum*, 10 Febr. de 1880.

(2) Encicl. *Arcanum*, 10 Febr. de 1880.

accesorio de Cornisaría de vigilancia; un empleado público actuando de pontífice laico, para tomar los dichos a los pretendientes, y una partida en el registro avalando el acto con la firma desvalorada de un intruso..., eso es todo.

Y basta eso también para saber lo que todo católico:

**debe pensar y debe practicar
en este punto.**

Introducido en las modernas legislaciones por enemigos jurados de la Iglesia y del Sumo Pontificado, los jansenistas y los enciclopedistas, y por gobernantes desapoderadamente ambiciosos y déspotas, que soñaban con esclavizar a su capricho incluso las conciencias, y que, atacados del vértigo del absolutismo regalista y del positivismo materialista, graduaban la grandeza y prosperidad de los pueblos por el índice de sus riquezas y la pujanza de sus ejércitos; o, como dice León XIII, ideado por hombres que, imbuidos en las opiniones de la falsa filosofía y en las costumbres corrompidas de la época, nada llevaban tan a mal como obedecer y sujetarse, y trabajaban con todas sus fuerzas para que no solamente los individuos, sino también las familias y la sociedad entera desprecien soberbiamente el imperio de Dios y se declaren emancipados de su tutela...

**el matrimonio civil forzoso
no podemos en modo alguno
admitirlo los católicos,**

ni lo admitiremos nunca, como ley obligatoria en el foro interno; antes bien procuraremos con todo ahínco su abolición por las vías justas y legales, aunque razones más altas que la voluntad abusiva de quien lo impone, aconsejen y menden a las veces atenerse, mientras subsista, al precepto legal, que nada vale de por sí, por adolecer de incurable y manifiesta nulidad en su mismo origen.

**Jamás la arbitrariedad puede ser
madre de la obligación y del deber:**

quien afirme lo contrario, valdrá posiblemente para asesores asalariados de la tiranía, pero no para buen cristiano. Y arbitraria es la autoridad estatal, imponiendo a todos cuantos quieran casarse, sin excepción, el matrimonio civil obligatorio, por más que en el panteísmo jurídico de los sofistas parlamentarios no se reconozca otro derecho soberano que el del Estado.

Realmente, aun prescindiendo de su carácter de sacramento entre los bautizados, el matrimonio, por la índole

sagrada que reviste, por los vínculos indisolubles que origina y por el fin primario que se endereza, es, y siempre lo ha sido, en su aspecto más importante, un asunto de moral, de Religión, de conciencia; pues liga entre sí almas y cuerpos con derechos y deberes esencialmente morales; y crea un género de vida eminentemente privado, vida honesta y veneranda, de íntimo afecto y absoluta fidelidad, de reproducción y de crianza de seres que, continuando la personalidad de los padres, sean dignos del fin para que todo hombre viene a este mundo.

Ahora bien: si todo esto pendiera del arbitrio y libre determinación del Estado, y a él hubieran de atemperarse los católicos,

o bien sería el efecto superior a la causa,
o habría que reconocer que el Estado
tiene poder religioso, espiritual, moral y privado:
que es César, Sumo Pontífice y Dios.

Ni vale argumentar diciendo que el matrimonio es un contrato civil, y que todos los contratos, más aún, todos los contratos civiles, caen bajo la jurisdicción y deben ajustarse para su validez a las formalidades y normas del Estado.

Eso es filosofar al aire, y sembrar tinieblas en la atmósfera con la pretensión de que de ellas brote la luz. Precisamente apuntábamos, hace poco, y empezábamos a demostrar lo contrario.

El matrimonio no es,
aun entre paganos o infieles,
un contrato civil.

Cierto es que puede llamársele contrato en razón del consentimiento recíproco y libre de dos voluntades que se obligan, y porque así lo llaman autores de la mejor nota y muchos documentos autorizados por la Iglesia.

Pase igualmente que se le denomine contrato civil, y así se la considere, por cuanto nace y se lleva a cabo en medio de la sociedad civil, por cuanto influye notablemente, bajo múltiples formas, en el bienestar civil, y por cuanto produce numerosas relaciones jurídicas y efectos civiles.

Pero de ningún modo puede concederse que sea un contrato civil en cuanto a su parte principal y aspecto dominante y propiedades esenciales: de ningún modo puede concederse que sea un contrato civil en su sustancia; ya porque la cosa, objeto del mismo, no es apropiable ni enajenable en el comercio humano, ya también porque la misma naturaleza, con exclusión de todo poder extraño, determina y señala distintamente su fin primordial, la materia sobre que versa, las personas contrayentes, la capacidad o aptitud previa de las mismas, los deberes y los derechos a que da origen, y la necesidad indispensable del consentimiento expreso, que no puede presuponerse ni suplirse por nada ni por nadie, mientras en los contratos civiles se presupone o suple muchas veces por la ley.

No es, por tanto, el matrimonio un contrato civil, sujeto a la potestad política del Estado, sino un *acto*, o si se quiere, un contrato, natural fuera de toda ingerencia de los Gobiernos en sus elementos constitutivos, en su ética, en su raíz y necesarios frutos.

Examinemos la cuestión a la luz de otras premisas, y no nos será difícil llegar a idéntico resultado.

El matrimonio, en sí mismo considerado, es un asunto

de dominio y pertenencia doméstica,
de dominio y pertenencia individual,
de dominio y pertenencia divina...

esferas vedadas irreductiblemente al universalismo intervencionista del Estado.

Es primeramente de dominio y pertenencia doméstica; no sólo porque de él proviene originariamente y en él se funda la familia, sino también, porque la familia es el campo donde nace y crece y prospera el hombre, y la patria por testad la providencia suave y fuerte que lo cultiva y dirige y perfecciona.

¿A quién pertenece, o de quién es cada uno de los contrayentes?—De su familia, como lo indican sus propios apellidos, y lo significamos invocando a sus padres. ¿De donde salen para establecer un nuevo hogar independiente?—De sus familias respectivas. Y en su nuevo estado marital ¿qué es lo que constituyen antes que todo?—Una familia. De otro lado ¿dónde se prepara el matrimonio?—En la familia. ¿Dónde produce sus efectos inmediatos?—En la familia. Y ¿no había de ser negocio de índole familiar y doméstica el matrimonio?

Es también de dominio y pertenencia individual; como que tiende, en cada una de las partes, a hacer con la otra una sola personalidad; un solo e indivisible principio de generación; como que tiende a hacer de dos espíritus un solo espíritu, de dos cuerpos un solo cuerpo, de dos seres un solo ser, hasta el punto de que cada uno de los consortes, amando al otro, a *sí mismo se ama*, en expresión de San Pablo.

Donación completa de sí mismo; suerte irrevocable de vida íntima entre dos, promesa de amor eterno... ¿qué hay que más interese y más de cerca toque al individuo?

Es, finalmente, de dominio y pertenencia divina; como quiera que plasma y constituye la causa instrumental, de que se vale la divina omnipotencia para la producción sucesiva del hombre. Porque si bien Dios mismo saca de la nada el alma, mas para ello ha menester que los padres produzcan el cuerpo, y uno es el término completo de ambas acciones, el hombre...; lo cual granjea y confiere a los esposos la investidura de cooperadores del muy Alto en la creación de la persona o del ser humano. Esto sin contar que todo hombre lleva impresa en su interior estampa la

imagen y semejanza de Dios, y viene al mundo ineludiblemente a prolongar la serie de los adoradores de Dios, y está destinado esencialmente a poscer y gozar a Dios. Por eso el matrimonio es en sí mismo una cosa sagrada y santa: por su carácter de ministerio santo y sagrado, y por su doble fin no menos sagrado y santo.

Siendo esto así,

¿cómo será posible que se halle sometido al arbitrio y régimen de la sociedad civil y del Estado?

Desde luego, en la mies de Dios no hay institución humana, que pueda meter la hoz, ni hay sociedad civil ni Estado, que sea quién para quitar ni añadir nada, ni reformar en ningún sentido, el medio auxiliar o causa dispositiva, que, tal como salió de sus manos, quiso el Supremo Artífice asociar a su acto creador.

Pero aun bajo los otros aspectos, la familia es anterior a la sociedad civil, es anterior al Estado, en causalidad y en tiempo. La sociedad civil nace de ella, y de ella se nutre y robustece; pero no la destruye, ni desvanece ni acorta sus derechos...; a menos que se diga que la planta, pura no morir, mata la raíz, de donde germina, y que para montar una máquina se precisó no ya la coordinación, sino el rompimiento y la dispersión de las piezas, que deben integrarla.

La constitución interna de la familia, sus leyes fundamentales, el adelantamiento, la religiosidad, la dependencia mutua y mutuas relaciones de sus miembros..., todo, en suma, cuanto al gobierno y organización privativa del hogar doméstico se refiere y mira, es recinto acotado a las facultades de los poderes sociales, cantón a salvo de las intromisiones del Estado. Podrá el Estado, podrá la autoridad social confirmar los derechos familiares, garantizarlos contra todo ataque del exterior, corregir sus demasías y extralimitaciones, si acaso traspasan los linderos de la justicia, o cuando de la cerca privada es de temer que transciendan a la esfera pública de la sociedad. Pero no puede nunca invadirlos, aminorarlos, desconocerlos, atropellarlos...; como no puede constituirlos o fundarlos, extinguirlos o invalidarlos. El organismo integral de la familia es intangible: La sociedad lo presupone y lo encuentra implantado y vigente; y lejos de absorberlo en el radio de sus atribuciones, lo respeta y conserva en su nativa estructura, y lo aprovecha como fuente de vida y sostén de sus fuerzas. ¡Ay de la sociedad, el día en que repunte como crecencia suya la familia, y acometa la empresa suicida de vaciarla en sus moldes secularizadores y deformados! En su pecado llevará la penitencia.

Otro tanto hay que decir,
si tenemos en cuenta
el punto de vista individual del matrimonio,

¿Cómo ha de ser el Estado quien imponga y regule los sentimientos más íntimos, la simpatía, el amor, la confianza, la afinidad, la entrega recíproca y recíproca coinpenetración de dos corazones, que se funden y se convierten en uno solo? ¿Cómo ha de ser el Estado quien ajuste sobre mis hombros una coyunda insoluble, que aprisiona en sus giros toda la existencia, y encamina de por vida mis pasos por sendas de luz o de tinieblas, por las sendas de la felicidad o de la desgracia irremediable? ¿Cómo ha de ser el Estado quien avele y formalice la enajenación, que de sí mismos hacen los esposos de cuerpo y alma? Tanto valdría declararle omnipotente, y sostener que el Estado puede autorizar la esclavitud; ya que menos estrechos, más flojos son los lazos entre siervo y dueño que entre marido y mujer. La misma paterna autoridad y patria potestad, la más respetable y veneranda de todas, no basta para influir a capricho en las bouas de los hijos y hacerlas depender de su propia jurisdicción. ¡Cuánto menos podrá hacerlo, por derecho divino natural, la autoridad civil y potestad política, extraña y advenediza, del Estado!

Ni siquiera a título o pretexto de *eugenesia*. Porque hay muchos modernamente, que, contrariando los sentimientos y derechos naturales del individuo, y dominados por un espíritu criminal de seleccionismo execrable «anteponen el fin eugénico a todo otro fin, aun de orden más elevado, y quisieran que se prohibiese por la pública autoridad contraer matrimonio a todos los que, según las normas y conjeturas de su ciencia, juzgan que hablan de engendrar hijos defectuosos por razón de la transmisión hereditaria, aun cuando sean de suyo aptos para contraer matrimonio» (1); es decir, que pretenden absurdamente que se prohíba por el Estado el casamiento de todos los individuos afectados de enfermedad susceptible de transmitirse por la herencia, empleando para ello, si fuera preciso, la coacción.

(1) *Encicl. Casti connubii*.

Esto sería el colmo de la barbarie y del despotismo estatal, esto sería retroceder a los tiempos de Lacedemonia y de Esparta; porque es considerar a la humanidad solamente como una especie zoológica, y al hombre como un ejemplar de la misma, y negar por sistema el factor moral y la base ética del matrimonio, borrando así el respeto que se le debe, suprimiendo la libertad individual e instaurando la tiranía del Estado en nombre de la raza. Toda conciencia elevada y recta protesta indignada contra tamaño atropello.

«Cuanto obran de este modo, pronuncia enérgicamente Pío XI, olvidan en su perversidad que es más santa la familia que el Estado, y que los hombres no se engendran principalmente para la tierra y el tiempo, sino para el cielo y la eternidad. Y de ninguna manera se puede permitir que a hombres, de suya capaces del matrimonio, se les considere gravemente culpables si le contraen, porque se conjetura que, aun empleando el mayor cuidado y diligencia, no han de engendrar más que hijos defectuosos. Otra cosa es que de ordinario deba aconsejarseles que no lo contraingan» (1)

No hay ninguna razón que sirva de abono al intervencionismo del Estado en las condiciones esenciales del matrimonio. Y cuando en ellas interviene, usurpa sacrilegamente poderes que no le pertenecen. Por eso el matrimonio civil, propiamente dicho, como forma legal única de unión conyugal, es un abuso intolerable, una imposición de la fuerza contra toda justicia y todo derecho.

III

Pero aunque todos los motivos hasta aquí expuestos se desvaneciesen y fallasen, hay otro efficacísimo y de fuerza irrefutable, que rechaza y elimina por completo toda ingerencia de los poderes seculares en el matrimonio cristiano.

El matrimonio cristiano, contra lo que sucede en el matrimonio de los no cristianos, es verdadera y rigurosamente sacramento, instituido, como todos los sacramentos, por el mismo Jesucristo en persona. Lo cual quiere decir que los esposos, al celebrar, debidamente asistidos, por medio del consentimiento mutuo el contrato conyugal, en que consiste el matrimonio, actúan, o realizan, o hacen y reciben un sacramento. Y no hay, ni es posible que haya entre cristianos, matrimonio verdadero, sin que sea al mismo tiempo verdadero sacramento.

(1) *Encicl. Catt. conubii.*

Es así que, por derecho divino positivo y natural, el Estado es incompetente, no tiene facultades el Estado, para intervenir, conocer y legislar en materia de sacramentos, sino que todo lo relativo a ellos

pertenece a la Iglesia,
y de la Iglesia únicamente depende,
y por la Iglesia se regula;

luego el Estado se arroga con abuso manifiesto poderes indebidos, y se sale de su propia esfera, cuando avoca a su tribunal el matrimonio y condiciona su legitimidad y validez, y decreta su caducidad o disolución, esto es, cuando impone a los cristianos el matrimonio civil. Por eso no tiene, ante Dios y su Ley, ante el derecho divino natural y positivo, el más mínimo valor, es nulo enteramente el matrimonio de cristianos llamado matrimonio civil, o sea, celebrado ante el juez o ante cualquier otro funcionario del Estado...; porque es imposible que los cristianos contraigan matrimonio verdadero, si no reciben verdadero sacramento; y las instituciones laicales, por alta que sea su jerarquía, carecen de misión, carecen de derecho para producir o autorizar y condicionar un sacramento.

Si el contrato matrimonial, es decir el matrimonio, fuera una cosa, y el sacramento fuera otra cosa realmente distinta y separable de la anterior, pudiera ser que un cristiano contrajera matrimonio natural o matrimonio—contrato, y no contrajera matrimonio—sacramento, renunciando a la bendición nupcial. Pero no siendo el matrimonio y el sacramento dos cosas realmente distintas y separables, sino una sola cosa, y por lo tanto inseparable de sí misma, forzoso es concluir que

el matrimonio de cristianos
o es sacramento, o no es matrimonio.

Jesucristo no creó un matrimonio nuevo para elevarlo a la dignidad de sacramento, dejando en su ser de mero contrato el que ya existía, sino que el único matrimonio existente lo transformó en sacramento para los cristianos. Desde entonces, así como, quitando al hombre lo que tiene de animal racional, se destruye el hombre y del hombre no queda nada, porque el hombre es animal racional y solamente animal racional, así, quitando al matrimonio de los cristianos lo que tiene de sacramento, se destruye el matrimonio y de matrimonio no queda nada, porque el matrimonio de los cristianos es sacramento y solamente sacramento. Desde entonces o no hay matrimonio entre hombre y mujer cristianos, o si hay matrimonio, hay, por el mismo caso, sacramento. Esta es la doctrina católica, y, como católica, la única verdadera; y toda otra doctrina es antecatólica, y por lo tanto errónea y falsa.

Definiciones pontificias
sobre este punto.

Tarea fácil y gustosa nos sería citar en tiramita continua los documentos de los Pontífices, que ilustran esta materia. Citaremos tan sólo algunos en gracia a la brevedad.

«Es un dogma de nuestra fe, dice Pío IX, que Jesucristo elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento; y es doctrina de la Iglesia católica que el sacramento no es una cualidad accidental sobreañadida al contrato, sino algo que pertenece a la esencia misma del matrimonio,

de suerte que la unión conyugal entre cristianos
no es legítima sino en el matrimonio-sacramento,
fuera del cual todo lo que se haga
no es más que un puro concubinato.

Una ley civil que, suponiendo la separabilidad entre el sacramento y el contrato de los católicos, reglamentara la validez del matrimonio, esté en contradicción con la doctrina de la Iglesia, usurpa sus derechos inalienables, y prácticamente coloca en el mismo plano el concubinato y el sacramento del matrimonio, al sancionarlos ambos como igualmente legítimos» (1).

Y también: «Ningún católico puede ignorar que el matrimonio es uno de los siete sacramentos de la Ley evangélica instituido por Cristo nuestro Señor; y que, por lo tanto, entre cristianos no puede haber matrimonio que no sea al mismo tiempo sacramento; y que por ello toda unión de hombre y de mujer cristianos fuera del sacramento, aunque se realice en virtud de la ley civil, no es más que vergonzoso y execrable concubinato. El sacramento no puede nunca separarse del contrato matrimonial» (2).

Conforme a lo cual declaró temeraria, falsa, escandalosa, errónea, herética y cismática la doctrina del profesor turinense Juan Nepomuceno Nuyts, y comprendió en el Silabus y condenó la siguiente proposición: *En virtud del contrato meramente civil, puede haber entre cristianos verdadero matrimonio; y es falso que el contrato del matrimonio entre cristianos es siempre sacramento, como también que el contrato es nulo si se excluye el sacramento* (3).

De igual manera León XIII define terminantemente que «según la noción esencial del matrimonio cristiano, el vínculo conyugal se identifica con el sacramento, y constituye inseparablemente con él un solo lazo y una sola realidad», siendo la doctrina contraria «un error dogmático cien veces condenado por la Iglesia»; y que «sin el sacramento la unión entre cristianos no puede ser ni lícita, ni honesta, ni duradera»; y que «fuera de las formas establecidas por Dios y por la Iglesia no hay honestidad, ni santidad del vínculo sin la gracia del sacramento» (4).

(1) Epist. ad Regem Sardiniae, 19 Set. 1852.

(2) Alloc. *Acerbissimum*, 27 Set. 1852.

(3) Syllabus, prop. 66 y 73.

(4) Carta a los Arzobispos y Obispos de Italia, 1.º de Junio de 1879.

Y en la encíclica *Arcanum* resume el mismo Pontífice toda la doctrina sobre este particular con estas palabras: «La distinción, mejor dicho, separación del contrato matrimonial y del sacramento no puede admitirse en modo alguno, siendo cosa averiguada que en el matrimonio cristiano *el contrato no es separable del sacramento*; y que por lo mismo, *no puede existir contrato verdadero y legítimo, que no sea al mismo tiempo sacramento*. Porque Jesucristo nuestro Señor avaloró el matrimonio con la dignidad de sacramento; mas el matrimonio es el mismo contrato, si ha sido celebrado conforme a derecho. Alégase a esto que el matrimonio es sacramento a causa de ser signo sagrado que produce gracia, e imagen de las místicas bodas de Cristo con su Iglesia, cuya forma y figura se expresan con aquel mismo vínculo de suma unión, por el que hombre y mujer se enlazan entre sí, el cual no es otra cosa que el mismo matrimonio. Consta, pues, que *entre cristianos todo justo conyugio en sí y de por sí es sacramento*; y que nada dista más de la verdad que decir que el sacramento es cierta dignidad agregada o propiedad unida extrínsecamente al matrimonio, la cual pueda, al arbitrio de los hombres, separarse del contrato.» (1)

Esto no obstante, como el matrimonio sea fuente y causa de relaciones jurídicas íntimamente conexas con el derecho individual y con el bien común, cuyo ordenamiento y tutela incumbe estrictamente al Estado, libre es la potestad secular moviéndose en su esfera, y por lo tanto legislando sobre los efectos, consecuencias y garantías civiles del matrimonio de sus súbditos, con tal que deje a la autoridad divina de la Iglesia lo que sólo a ella encomendó su divino Fundador... Esa sería obra conciliadora y fructífera, y merecería la aprobación y los aplausos de todos.

Terminemos ya, proponiendo en breves enunciados cuanto de todo lo dicho se desprende. Esto es:

1.º El matrimonio en sí mismo considerado es por su misma naturaleza una cosa sagrada y santa.

2.º El matrimonio de los cristianos es verdadera y propiamente un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo.

3.º El sacramento y el contrato marital, o matrimonio, son una sola y misma cosa, y de ningún modo pueden separarse.

4.º Sólo a la Iglesia pertenece, por disposición de su divino Fundador, toda la economía y reglamentación del matrimonio entre cristianos. Por consiguiente:

5.º El Estado no tiene facultades para casar y descasar a los católicos, y se hace reo de lesa derecho divino y eclesiástico al declarar y tener como válido su matrimonio celebrado ante el funcionario público, o al disolver el matrimonio canónico.

(1) Encicl. *Arcanum*, 10 de Feb. 1880.

6.º El llamado matrimonio civil no es verdadero y legítimo matrimonio; es solamente barraganía o concubinato.

7.º Los que sólo se casan civilmente, no son marido y mujer, ni están casados de verdad; son manceba y concubino; y ni pueden ser admitidos a la participación de los sacramentos, ni recibir sepultura eclesiástica.

Por todo lo cual, en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia y en nombre de la conciencia cristiana, os requerimos que no atentéis contra la validez o la indisolubilidad del santo matrimonio, conformándoos con haber observado el trámite de las prescripciones legales o con haber obtenido la sentencia favorable de los tribunales civiles, porque tanto valdría caer en gravísimo pecado y vivir en estado de eterna condenación. Y si, para evitar vejámenes injustos, y sólo constreñidos por la fuerza, convenga obedecer en lo posible y poner en práctica las formalidades de la ley; pero que esto se entienda, permaneciendo firme e inviolable la obligación de acudir siempre a la autoridad eclesiástica y atenerse puntualmente a sus canones, según lo que Dios ha ordenado y la Iglesia manda y enseña.

Haga Dios Padre Omnipotente, primer autor del matrimonio; haga Nuestro Señor y Redentor Jesucristo, fundador y perfeccionador de los venerandos sacramentos, que quiso y determinó que el matrimonio fuese una imagen mística de su unión inefable con la Iglesia; haga el Espíritu Santo, Dios Caridad, lumbré de los corazones y vigor de las almas, que cuanto en esta Carta hemos expuesto acerca del santo sacramento del matrimonio, lo impriman todos en su inteligencia, lo achen en su voluntad, y, con la gracia divina, lo pongan por obra, para que unión tan venerable, como la conyugal, lejos de ser para nadie tropiezo y escándalo y lazo de condenación, sea para todos manantial de bienes domésticos, garantía de los intereses sociales y ayuda de costa, que nos facilite la consecución de la eterna vida (1).

Para que así suceda, os damos a todos nuestra pastoral bendición, prenda de la bendición más copiosa de Dios Omnipotente.

En nuestro Palacio episcopal de Segovia a 30 de Marzo de 1932,

† LUCIANO, OBISPO DE SEGOVIA

Léase esta instrucción Pastoral a los fieles en la forma acostumbrada.

(1) Encicl. *Cásti conuñú*, 31 Dic. de 1930.

7.- Proyecto de ley de Matrimonio civil

D. de S. IX, núm. 163, 11 de mayo de 1932, pág. 5515, texto en el apéndice 52.

A las Cortes constituyentes:

Existen muchos preceptos legales promulgados bajo el régimen anterior e informados por su espíritu, que se hallan en contradicción manifiesta con la Constitución vigente, ley fundamental de un Estado republicano laico. Entre estos preceptos se cuentan diferentes disposiciones del Código civil, destacándose por su importancia algunas de las referentes a la institución del matrimonio.

Es ésta, precisamente, una de las materias en que ha ejercido mayor influencia el carácter confesional del régimen desaparecido. El título IV del libro I del Código civil es la consagración legislativa de aquel espíritu de reacción que ya se manifestó en el decreto de 9 de febrero de 1875. En el artículo 42, tan censurado por diversos motivos, el Código civil divide a los españoles en dos clases por razón de sus creencias, e impone a los católicos como deber legal el matrimonio canónico, único que pueden contraer. Y llevó tan lejos el legislador las consecuencias del carácter confesional del Estado en el antiguo régimen, que en el número IV del artículo 83 prohíbe el matrimonio civil a los ordenados "in sacris" y a los profesos en una Orden religiosa canónicamente aprobada, ligados con voto solemne de castidad, convirtiendo así un deber de conciencia del católico en una causa modificativa de la capacidad civil del ciudadano.

Es evidente que esos textos legales son totalmente incompatibles con una Constitución que consagra el principio de que el Estado no tiene religión oficial, y que dice no podrán ser fundamento de privilegio jurídico las creencias religiosas, y que la condición religiosa no constituye circunstancia modificativa de la personalidad civil. Y es consecuencia indeclinable de esa incompatibilidad civil la de que aquellos artículos del Código civil, igual que otros que en ellos se inspiran, han quedado derogados.

Han quedado derogados dichos textos por el solo hecho de haber entrado en vigor la Constitución de la República, sin que sea preciso, para privarles de su fuerza de obligar, que se dicte una nueva ley ordinaria que venga a sustituirlos. De no ser así se daría el absurdo de que el principio de que la ley posterior y contraria deroga a la anterior no se aplicaba a la ley fundamental, concediéndole menos fuerza que a las ordinarias, cuando lo que ocurre es lo contrario, pues la ley ordinaria, derogada por otra de igual clase, puede recobrar su vigencia por la sola voluntad del legislador, mientras que las leyes derogadas por la nueva Constitución contraria

a ellas necesitarían para volver a tener plena eficacia jurídica que se realizara previamente una reforma constitucional.

Como la Constitución de la República ha destruido los preceptos fundamentales que venían rigiendo en materia de matrimonio y no los ha sustituido por otros, porque no es esa su misión, se ha creado una situación insostenible de la que hay que salir. El Poder ejecutivo podría, sin duda alguna, dictar normas que vinieran a sustituir, aunque fuera provisionalmente, a las desaparecidas; pero la importancia de la materia, y, sobre todo, el respeto debido a la soberanía de las Cortes, aconsejan que sean éstas las que den la solución.

Para dejar resueltos de una vez todos los importantes problemas que plantea una buena regulación del matrimonio, tal como la pide, por una parte, los progresos de la técnica jurídica, y por otra el nuevo espíritu que informa a la República española, es preciso realizar una labor intensa que no puede llevarse a cabo en pocas semanas. Mas como la índole delicada de la materia y la irreductible oposición que existe entre los textos constitucionales vigentes y las leyes derogadas por ellos, y que aún se siguen aplicando, no permiten que la situación actual se prolongue mucho tiempo, en espera de que las Cortes sancionen una ley de Matrimonio civil extensa y compleja, como tiene que serlo, y como lo es en el anteproyecto que prepara la Comisión Jurídica Asesora, es necesario llegar a una solución provisional.

Esta solución consiste en establecer como único matrimonio reconocido por la ley el civil, ya regulado por el capítulo III del título IV del libro I del Código civil vigente, con algunas modificaciones que lo simplifiquen en lo posible, lo atemperen a la igualdad actual de los sexos y a la declaración constitucional de que la condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil, descentralicen la concesión de dispensas de edictos e impedimentos y le hagan fácilmente accesible en el orden económico a todos los ciudadanos.

No son éstas las únicas modificaciones que hay que llevar a cabo en la materia, pero ahora tan sólo se trata de poner fin a la oposición que existe entre la ley fundamental del Estado y las leyes ordinarias que se venían aplicando. Tan solo hay que añadir algunas disposiciones relativas a la jurisdicción llamada a conocer de los litigios que se promuevan en materia de matrimonio.

Los Tribunales civiles deben ser, sin duda alguna, los únicos competentes para conocer de todas aquellas cuestiones a que de lugar la aplicación de la ley que ahora se propone. En cuanto a las demandas de nulidad de los matrimonios canónicos celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley, deben conocer de ellas también los Tribunales ordinarios, pues los eclesiásticos no pueden ya dictar fallos con carácter obligatorio dentro de la República española. No obstante, la ley que hayan de tener en cuenta

los Tribunales civiles será la ley canónica, por ser la que presidió la celebración del matrimonio que se trata de anular y la única que puede servir para determinar si tal matrimonio es nulo o válido. Nada se opone a que ante los Tribunales ordinarios se aleguen leyes canónicas y sean por ellos aplicadas, porque pueden aplicar leyes derogadas, y las canónicas relativas al matrimonio fueron leyes del reino, así como leyes extranjeras, si es que se quiere conceder este carácter a las leyes de la Iglesia.

Por todas estas razones, el ministro que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación de las Cortes el siguiente proyecto de ley:

Artículo 1º. A partir de la vigencia de la presente ley, sólo se reconoce una forma de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a lo dispuesto en las secciones primera y segunda del capítulo III del título IV del libro I del Código civil, con las modificaciones siguientes:

1ª. Los mayores de edad no están obligados a obtener ni acreditar el consejo a que se refieren el número primero del artículo 45 y el artículo 47 del Código civil.

2ª. La licencia que deben obtener los menores de edad se acreditará mediante documento autorizado por notario, por el funcionario ante quien debe celebrarse el matrimonio o por el juez municipal del domicilio del solicitante, si no fuese el elegido para la celebración del acto.

3ª. Queda suprimido el impedimento señalado en el número 4º del artículo 83 del Código civil.

4ª. No serán impedimento para contraer matrimonio la consanguinidad y afinidad legítimas entre colaterales, a que se refieren los números 2º y 3º del artículo 84 del mismo Código.

5ª. La dispensa de los impedimentos mencionados en el artículo 85 del Código civil será concedida por el juez de primera instancia del partido a que corresponda el Juzgado municipal designado para la celebración del matrimonio.

El mismo juez de primera instancia podrá dispensar la publicación de edictos por las causas que se indican en el artículo 92 del referido Código.

6ª. El matrimonio se celebrará en la forma prevenida en el artículo 100 del Código civil, omitiendo la lectura del artículo 57 de dicho cuerpo legal.

Art. 2º. No se exigirán derechos por el expediente matrimonial ni por la celebración del acto.

Art. 3º. Las certificaciones del Registro civil y demás documentos que sean precisos para la celebración del matrimonio se expedirán en papel timbrado de la última clase y sin exacción de derechos, expresándose al pie de los mismos que sólo serán válidos para este fin.

Art. 4º. La jurisdicción civil es la única competente para resolver todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación de esta ley, incluso las que se relacionan con la validez o nulidad de los matrimonios celebrados con arreglo a la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 101 a 103 del Código civil.

Las cuestiones relacionadas con la validez o nulidad de los matrimonios canónicos celebrados antes de la vigencia de esta ley serán resueltos por los Tribunales civiles, que aplicarán las leyes canónicas con arreglo a las que fueron contraídos.

Las sentencias y demás resoluciones de los Tribunales eclesiásticos sobre lo que constituye el objeto de esta ley no producirán efectos civiles.

Art. 5º. La presente ley comenzará a regir a los treinta días de su publicación en la "Gaceta de Madrid".

Art. 6º. Quedan derogadas todas las disposiciones legales, reglamentos, decretos y órdenes que se opongan a lo dispuesto en esta ley.

8.~ Ley sobre el matrimonio civil de 28 de junio de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 185, 3 de julio de 1932, pág. 60.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado y sancionado la siguiente

LEY

Artículo 1.º A partir de la vigencia de la presente Ley, sólo se reconoce una forma de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a lo dispuesto en las secciones primera y segunda del capítulo 3.º del título 1.º del libro 1.º del Código civil, con las modificaciones siguientes:

1.º Los mayores de edad no están obligados a obtener ni acreditar el consejo a que se refiere el número 1.º del artículo 45 y el artículo 47 del Código civil.

2.º La licencia que deben obtener los menores de edad se acreditará mediante documento autorizado por Notario, por el funcionario ante quien deba celebrarse el matrimonio o por el Juez municipal del domicilio del que haya de otorgarla, si no fuese el elegido para la celebración del acto.

3.º Queda suprimido el impedimento sedado en el número 4.º del artículo 53 del Código civil.

4.º No podrán contraer matrimonio entre sí los colaterales por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, sustituyéndose con esta disposición lo establecido sobre impedimentos en los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 54 del mismo Código.

5.º Al Juez de primera instancia del partido a que pertenezca el Juzgado municipal designado para la celebración del matrimonio correspondrá disponer, a instancia de parte y mediando justa causa, los impedimentos nacidos de la consanguinidad en tercer grado entre colaterales, de la afinidad en línea colateral, el comprendido en el número 2.º del artículo 45 del Código civil y los referentes a los descendientes del adoptante con el adoptado. El mismo Juez de primera instancia podrá dispensar la publicación de los actos por las causas que se refieren en el artículo 92 de la misma Ley.

6.º El matrimonio se celebrará en la forma prevista en el artículo 109 del Código civil, omitiendo la lectura del artículo 57 de dicho Cuerpo legal.

Artículo 2.º No se exigirá licencia por el expediente matrimonial ni por la celebración del acto.

Artículo 3.º Los certificaciones del Registro civil y demás documentos que sean precisos para la celebración del matrimonio se expedirán en papel timbrado de la misma clase y sin exacción de derechos, exceptuándose al ple de los mismos que sólo serán válidos para este fin.

Artículo 4.º La jurisdicción civil es la única competente para resolver todas las cuestiones a que dé lugar la aplicación de esta Ley, incluso las que se relacionen con la validez o nulidad de los matrimonios celebrados con arreglo a la misma conforme a lo dispuesto

to en los artículos 101 a 103 del Código civil. Las cuestiones relacionadas con la validez o nulidad de los matrimonios celebrados antes de la vigencia de esta Ley, serán resueltas por los Tribunales civiles, que aplicarán las Leyes entonces en vigor a las que fueran contrarios. Las sentencias y demás resoluciones de los Tribunales eclesiásticos sobre lo que constituye el objeto de esta Ley, no produzcan efectos civiles.

Artículo 7.º La presente Ley comenzará a regir a los treinta días, a contar desde el siguiente de su publicación en la Gaceta de Mayo.

Artículo 8.º Quedan derogadas todas las disposiciones legales, Reglamentos, Decretos y Ordenes que se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Por tanto:

Mando a todos los ciudadanos que concurran al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

Madrid, veintiocho de Junio de mil novecientos treinta y dos.

NICOLÁS ALFONSO MANGRÁ Y TORRES

El Ministro de Justicia

ALVARO DE ARCELOZ Y LINDEMANA

9.-*Instructio Pastoralis.*

BOE de Zamora, año 69, 30 de julio de 1932, núm. 9, págs. 201-205.

Venerabiles ac dilectissimi fratres:

Quamplurimis ex nostris dilectissimis cooperatoribus normas ac instructiones quaerentibus circa novissimam legem de matrimonio civili latam, in id, in vobis, tum litteris, tum ponsum congruum significare curavimus. Gravitas tamen rei, de qua agitur, utpote ambitum dogmaticae veritatis excurrens simulque disciplinam ecclesiasticam pervadens, postulat vehementer traditas normas breviter nunc enucleare, atque jura Ecclesiae, quantum fas sit, seria tectaque servare.

Atque ut inde haec nostra Instructio Pastoralis proficiatur, unde totius quaestionis fundamentum sit quaerendum, scire debetis, ac saepe saepius animo perpendere fontem a quo tandem aliquando haec postrema legis civilis dispositio profuit, in erroribus dogmaticis esse reponendum. Ab illa enim prodit radice liberalismi, qui jura Dei tum quoad singulas personas, tum quoad familias, tum denique quoad societatem civilem audacter ac superbe contemnens, recta via ac tramite directo ad abusum in jure matrimoniali pervenit. Praetermisso enim jure divino in iis quae ad familias et societatem civilem spectant, neglecta fuit Ecclesiae auctoritas in jure matrimoniali, ipsi a Domino Nostro Jesu Christo commissa, siquidem apud omnes gentes, nisi deliramenta communistarum excipias, semper ac ubique matrimonium recensitum fuit, tanquam fons et origo tum familiae tum civilis societatis. In hac ergo doctrina innixi qui reipublicae praesunt, plenam jurisdictionem in matrimoniis, etiam christianorum, sibi reservare decreverunt; unicam formam matrimonii, eamque civilem, articulo 1.^o agnoverunt; leges de impedimentis matrimonialibus tulerunt, ac derogarunt; et, quod vere absurdum juridicum redolet, tribunalibus civilibus advocarunt (articulo 4.^o) integram potestatem iudicandi, atque privativam facultatem, sententias ferendi de matrimoniis canonicis; num, videlicet, jure an vicio vel impedimento celebrata fuerint, penitus tollentes receptum ac tritum axioma: «*ejus quis sortitur forum, cujus ligatur legibus*».

Date igitur operam, carissimi cooperatores, ut apud fideles vestrae sollicitudini commendatos integre ac incorrupte retineatur doctrina, quam Dominus Noster et Ecclesia tradiderunt, et theologi ac canonistae passim dilucide et accurate exposuerunt. Haec autem summatim in hac formula continetur: «*Dogma est fidei ut matrimonium, quod ante adventum Christi nihil aliud erat nisi indissolubilis contractus, illud post Christi adventum evaserit unum ex septem evangelicae Legis sacra-*

mentis. (Hinc fit ut ad solam Ecclesiam, cui tota de sacramentis est cura concedita, jus omne ac potestas pertinet validam et licitam celebrationem matrimonii inter christianos sive legibus dirimentibus sive impediens ordinandi ac proinde de matrimoniorum validitate aut invaliditate sententias ferendi.

Nec quidquam prodesse valet illa tantopere repetita distinctio, vi cuius contractum matrimoniale a sacramento discernere autumant hodierni liberalismi fautores, eo sane ducti consilio ut Ecclesiae reservetur ratio sacramenti, ac civili societati contractus matrimonialis. Christus enim Dominus Noster dignitate sacramenti decoravit matrimonium; cum igitur matrimonium sit ipse contractus, patet dissociari non posse sacramentum a contractu in matrimoniis christianorum. Utrō est fatendum potestati civili competere facultatem ordinandi effectus civiles, qui a valore et honestate matrimonii christiani separari possint; immo etiam praescribendi ut conjuges qui matrimonium coram Ecclesia valide celebrarunt, in registro Status civilis, servatis formalitatibus, rite inserant. Minime vero toleranda est doctrina, secundum quam, matrimoniis christianis valide et licite juxta, leges canonicas initis, denegentur effectus civiles a matrimonio inseparabiles, ut est legitimitas uxoris et mariti, ac proles ex iis natae.

Hanc, ut videtis, doctrinam penitus impetit lex de matrimonio civilis, nuper promulgata, quae mense proximo Augusti viam suam exeret. Praecipuas igitur curas in id assumite, ut eos qui ex vestris fidelibus ad nuptias parati sint, zelo pastoralis ducti ac omnibus viis, quibus prudentia suadet, edocentis de valore matrimonii coram Ecclesia celebrati, ac de significatione matrimonii civilis nunc modo obligatorio praescripti. Hujusmodi enim matrimonium civile juxta veram doctrinam non est nisi turpis concubinatus, ac proinde qui in hujusmodi contubernio vivant, penitus neglectis legibus Ecclesiae catholicae, tanquam veri concubinarij jure meritoque habendi sunt; veram tamen ad vitanda inconvincenda, non tantum abstinere debetis a verbis injurijs, sed etiam ipsum concubinatum matrimonii civilis pro more loquendi Romanorum Pontificum Benedicti XIV et Leonis XIII terminis aequivalentibus, v. g. ritus vel caeremoniae civilis designare curabitis.

Ita ergo fideles vestri edocti de significatione hujus ritus civilis, satagite ut matrimonium canonicum celebrent *aequum apud judicem civilem sistant*, neque unquam ad civilem matrimonium procedant *priusquam impedimentum canonicum, illi forte obsistens, dispensatione Ecclesiae sit sublatum*. Si tamen absoluta necessitas vel alia ratio sufficiens, quae facile admittenda non est, ad ejusmodi ordinem invertendum causam praebere, tunc omni diligentia uti debetis ut matrimonium in facie Ecclesiae quamprimum celebretur, atque interim contrahentes separati vivant. (Instr. S. Poenit. 15 jan. 1886).

Sciant praeterea fideles, eos qui caeremonia civili contenti celebrationem matrimonii canonici renuant, et maritalem vitam agant, dummodo hic status notorius vel saltem publicus sit, sequentibus juris canonici dispositionibus ligari: excluduntur, nempe, a receptione sacramentorum et sacramentalium, ab officio patrini (can. 765, 795), ab omnibus actibus legitimis ecclesiasticis (can. 2.337, par. 2); impedimento dirimenti publicae honestatis subjiuntur (can. 1.078); valide recipi nequeunt in associationes religiosas ab Ecclesia probatas, et si earum sodales jam fuerint, ab ipsis dimitti debent (can. 693, 696); mulier benedictione «post partum» privatur; filii ex tali unione habiti sunt illegitimi et irregulares (can. 984, 1.114); demum, nisi ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa, sepultura ecclesiastica ipsis non conceditur (can. 1.240).

Dum autem sponsi iure civili a matrimonio prohibeantur, vel ipsi ritum civilem recusent, vobis licitum non sit, nisi de nostra expressa licentia, eos conjungere; etenim in praedictis casibus, ex omissis caeremoniis matrimonii civilis plura damna et spiritualia et temporalia tum proli tum sponsis obvenire possunt, eo maxime quod integrum erit alteri ex conjugibus ab altero separari et matrimonium civile cum alia persona inire. (Instr. S. Poenit.)

Quod ad minores attinet, bene perpendite Ecclesiae disciplinam canonibus 88, 1.034 expressam. Graviter ergo filiosfamilias qui vigesimumprimum annum non expleverint, hortari debetis ne nuptiae ineant insecis aut rationabiliter invitis parentibus; quod si abnuerint, ad matrimonii solemnizationem, *inconsulto Ordinario*, ne procedatis. Consensus aut dissensus parentum probari potest sive testimonio coram parcho vel Notario ecclesiastico oretenus dicto, quod tamen scripto redigendum erit, sive per scripturam etiam omnino privatam, de cuius auctoritate parcho loci constet, quae, sicuti documentum testimonii in suo casu, apud archivum paroeciae servabitur.

Si autem de matrimonio filiorumfamilias aetate majorum agatur, mens Ecclesiae procul dubio est ut celebretur de consilio parentum, propter pietatem et reverentiam iisdem debitam, quod animis fidelium erit inculcandum; in posterum tamen majores cogi non debent ad probandum speciali modo huiusmodi obligationi satisfecisse.

Similiter prae oculis habendi sunt canones 1.960, 1.967, 1990: Quare sententiae de nullitate matrimonii canonici, quas forte pronuntiabunt tribunalia civilia, in Ecclesia non habent eam vim ut fideles, neglecta auctoritate tribunalium ecclesiasticorum, novum matrimonium celebrari possint, etsi praedictae sententiae juxta sacrorum canonum praescriptiones fuerint pronuntiatæ et objectivae rei veritati de facio respondeant.

Denique, si iudices saeculares vel alii officiales qui caeremoniis matrimonii civilis ex officio assistunt, forte a vobis exquirant consilium de ratione agendi in casibus difficilioribus, oportet ut rem ad Ordinarium deferatis, atque interim sententia vestra neutro maneat, ne normis tradendis praejudicium causetur.

Quod si omnes, carissimi cooperatores, pro viribus curamus fidelium conscientias efformare hac de re, ita ut nullum alium matrimonium agnoscant validum nisi matrimonium coram Ecclesia celebratum, quaestiones quas nova lex civilis introducet, facile, ut plurimum, dissolventur.

Zamorae 23 Julii 1932.

† EMMANUEL, EPISC. ZAMORENSIS.

10.- Ley de modificación de la regla transitoria cuarta de la ley de divorcio, 11 de septiembre de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 262, 21 de septiembre de 1932, pág. 2094.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA,

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:

Que las CORTES han decretado y sancionado la siguiente

L E Y

Artículo único. La regla transitoria cuarta de la ley de Divorcio quedará modificada en los términos siguientes:

"Las sentencias firmes de divorcio perpetuo o indefinido, dictadas por los Tribunales civiles ante de la promulgación de esta Ley, producirán los efectos determinados en el capítulo III, en relación con el artículo 1.º de la misma.

Iguals efectos surtirán las sentencias firmes de divorcio perpetuo o indefinido, dictadas por los Tribunales eclesiásticos con anterioridad al Decreto del Gobierno de la República sobre esta materia, de fecha 3 de Noviembre de 1931, siempre que aquellas sentencias hubiesen obtenido en su día la oportuna validez civil.

Para que, tanto las sentencias civiles como las eclesiásticas expresadas en los párrafos anteriores, produzcan los efectos prevenidos en ellos, será preciso que lo solicite cualquiera de los cónyuges ante el Juez competente para conocer del divorcio; al que, haciéndole de la autenticidad de los documentos, hará las declaraciones oportunas, si el caso se hallase comprendido en las normas precedentes.

Las sentencias dictadas por los Tribunales eclesiásticos con posterioridad al Decreto del Gobierno de la República de 3 de Noviembre de 1931, no producirán efectos civiles.

Los pleitos de divorcio fallados por los Tribunales eclesiásticos con posterioridad a la fecha indicada, y antes de la vigencia de esta Ley, para surtir efectos, deberán ser sometidos a revisión del Tribunal civil competente para conocer del divorcio, pudiendo estarse por éste las causas consignadas en la presente Ley y decretarse el divorcio vincular que la misma establece.

Los Tribunales civiles podrán conceder valor y eficacia a las pruebas practicadas ante el Tribunal eclesiástico, cuando, a su juicio, hayan mediado las debidas garantías para los litigantes.

Las pruebas practicadas en los pleitos pendientes ante los Tribunales eclesiásticos, en que éstos no hayan dictado sentencia firme en la fecha de la promulgación de la presente Ley, podrán ser tomadas en cuenta por los Tribunales civiles, en los términos que previene el párrafo anterior, cuando dichos litigios sean sometidos a la jurisdicción de estos Tribunales."

Por tanto:

Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cumplimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la hagan cumplir.

San Sebastián, once de Septiembre de mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Justicia.

ALVARO DE ALBORNOS Y LAMINIANA

11.- 25 de julio de 1932. Instrucción y Normas de los
Prelados a los fieles en orden al matrimonio canónico.

(Publicado por todos los boletines eclesiásticos.- Recogido en IRIBARREN, Jesús. *Documentos colectivos del episcopado español. 1870-1970*, págs. 181-189 y también en *Iglesia y Estado durante la segunda República española. 1931-1936*, III, págs. 514-522).

1. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, Señor, Redentor y Pastor de nuestras almas, ya en su predicación evangélica, repitiendo las palabras del Génesis, proclamó la *santidad* e *indisolubilidad* del matrimonio, elevado en la ley de gracia a la dignidad de sacramento. En el evangelio de San Mateo (19,6) dice: «Así, pues, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre». Añadiendo luego: «Yo os digo que todo aquel que repudiare a su mujer, si no es por fornicación, y tomare otra, comete adulterio; y el que tomare la repudiada comete adulterio».

2. Y aun considerado el matrimonio bajo el solo aspecto de contrato de derecho natural, se observa que difiere de todos los demás contratos, no sólo por crear vínculos diversos de obligación, sino por lo que afecta a los mismos contrayentes, constituyéndolos, de personas independientes, al varón en cabeza y a la mujer en centro, con igual dignidad para ambos, de la sociedad doméstica, que es el fundamento y raíz de toda sociedad humana. Por ello la Iglesia, cuidadosa siempre y la única competente e interesada en lo que afecta a la salvación de las almas, no podía dejar de tener participación en materia tan necesaria para la sociedad temporal, que constituye la Iglesia militante; por esto, conforme con la institución de su divino Fundador, ha legislado sobre los fieles y con autoridad propia en materia matrimonial, tanto en la parte que atañe a la fe como a las obligaciones del estado conyugal y a los impedimentos que invalidan el matrimonio, imponiendo preceptos que conciernen a los actos y conducta del cristiano, sin cuya observancia, tanto como en el caso de falta de fe, nadie puede alcanzar la salvación eterna.

3. Y por tales motivos la santa Iglesia católica, apostólica y romana, constituida por Dios en depositaria de la fe y maestra de costumbres, ha proclamado unánimemente, conducida siempre por el Pontífice Romano, Vicario de Cristo, la dignidad sacramental, la santidad e insolubilidad del matrimonio, y la propia potestad en orden a él sobre todos los fieles bautizados. Y, en su virtud, el concilio de Trento, examinando para la debida tutela de la fe las doctrinas de los novadores de su tiempo, en la sesión XXIV, promulgada por la Santidad de Pio papa IV, en su Bula *Benedictus Deus* estatuyó los cánones siguientes: «1. Si alguno dijere que el matrimonio no es verdadera y propiamente uno de los siete sacramentos de la ley evangélica, instituido por Cristo nuestro Señor, sino inventado en la Iglesia por los hombres; y que no confiere gracia: sea anatema.—2. Si alguno dijere que es lícito a los cristianos tener a un mismo tiempo muchas mujeres, y que esto no está

prohibido por ninguna ley divina, sea anatema.—4. Si alguno dijere que la Iglesia no podía establecer impedimentos *dirimentes del matrimonio*, o que al establecerlos erró, sea anatema.

5. Si alguno dijere que se puede disolver el vínculo del matrimonio por la herejía, o cohabitación molesta, o ausencia afectiva del consorte, sea anatema.—7. Si alguno dijere que la Iglesia erra en haber enseñado y enseñar, según la doctrina del Evangelio y de los Apóstoles, que el vínculo del matrimonio no se puede disolver por el adulterio de uno de los consortes, y en enseñar que ninguno de los dos, ni aun el inocente que no dio motivo al adulterio, pueden contraer otro matrimonio viviendo el otro consorte, y que cae en fornicación el que se casare con otra, dejada la primera por adúltera, o la que dejando al adúltero se casare con otro, sea anatema.—8. Si alguno dijere que erra la Iglesia al decretar que por muchas causas puede hacerse la separación del *talamo* o de la cohabitación entre los cónyuges por tiempo determinado o indeterminado, sea anatema.—12. Si alguno dijere que las causas matrimoniales no pertenecen a los jueces eclesiásticos, sea anatema.

4. Esta doctrina queda confirmada por las proposiciones contenidas en el *Syllabus* de Pío IX, y en el *Código de Derecho Canónico*, redactado por mandato de Pío X y promulgado por Benedicto XV, ambos de feliz y santa memoria, con valor dogmático y disciplinar obligatorio para todo fiel cristiano, se estatuyeron los cánones del título VII del libro III, en los cuales, recopilando las mismas enseñanzas seculares de todos los tiempos, se regula el matrimonio cristiano. Entre dichos cánones es necesario que los fieles recuerden principalmente los siguientes: «1012 § 1. Cristo nuestro Señor elevó el mismo contrato matrimonial entre bautizados a la dignidad de sacramento. § 2. Por tanto, entre bautizados no puede haber contrato matrimonial válido sin que por ello mismo sea sacramento.—1013 § 1. Fin *primario* del matrimonio es la procreación y educación de la prole; secundario, la mutua ayuda y el remedio de la concupiscencia. § 2. Propiedades esenciales del matrimonio son la *unidad* y la *indisolubilidad*, que en el matrimonio cristiano adquieren peculiar firmeza por razón del sacramento.—1016. El matrimonio de los bautizados se rige por el derecho no sólo divino, sino también canónico, salva la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente civiles del mismo matrimonio.—1038 § 1. Sólo a la suprema autoridad eclesiástica compete declarar cuándo el derecho divino impide o *dirime* el matrimonio. § 2. La misma autoridad suprema tiene el derecho exclusivo de establecer para los bautizados impedimentos *impedientes* o *dirimentes del matrimonio* por vía de ley universal o particular.—1094. Sólo son válidos los matrimonios que se contraen delante del párroco, o del Ordinario del lugar,

a de un sacerdote delegado por uno de ambos, y dos testigos; según, empero, las reglas expresadas en los cánones que siguen, y salvo las excepciones de que se habla en los cánones 1098 y 1099. § 1. A observar la forma arriba establecida vienen obligados: 1. Todos los bautizados en la Iglesia católica y los a ella convertidos de la herejía y del cisma, aunque tanto aquellos como éstos la hayan luego abandonado, todas las veces que contraigan matrimonio. 2. Los mismos antedichos, si contraen matrimonio con personas acatólicas, bautizadas o no, aun después de haber obtenido dispensa del impedimento de religión mixta y de disparidad de culto. 3. Los orientales, si contraen con latinos obligados a esta forma. § 2. Mantenido lo prescrito en el párrafo 1 de este canon, número 1, los acatólicos, bautizados o no, si contraen entre sí, en ningún lugar vienen obligados a observar la forma católica del matrimonio: como tampoco los nacidos de acatólicos, aun cuando bautizados en la Iglesia católica, si desde la edad infantil crecieron en la herejía, o cisma, o en la infidelidad, o sin religión alguna, siempre y cuando contraigan con parte católica.—1110. Del matrimonio válido nace entre los cónyuges un vínculo, por su naturaleza, perpetuo y exclusivo; además, el matrimonio cristiano confiere la gracia a los cónyuges que no le ponen óbice.—1113. Los padres tienen gravísima obligación de cuidar de la educación, ora religiosa y moral, ora física y civil de la prole en la medida de sus fuerzas, y de procurar también por su bien temporal.—1118. El matrimonio válido rato y consumado no puede ser disuelto por ninguna potestad humana ni por ninguna causa, fuera de la muerte». Consiguientemente a estas disposiciones y siguiendo lo enseñado por los concilios y constituciones apostólicas anteriores, proclama en el título XX del libro IV el primero de sus cánones, o sea el 1960, lo que sigue: «Las causas matrimoniales entre bautizados corresponden por derecho propio y exclusivo al juez eclesiástico».

5. Tal es la doctrina católica admirablemente expuesta y explanada por Su Santidad el papa Pío XI en su reciente encíclica *Casti connubii*, a la cual deben prestar adhesión completa todos los fieles. La Iglesia, empero, atenta siempre al mayor bien de sus fieles y no olvidando los efectos que causa el matrimonio en la vida civil, obedeciendo también a la misión de enseñar que le está conferida por su divino Fundador, ha cuidado siempre de exponer claramente lo que según las circunstancias especiales de los países y tiempos está permitido a los católicos y de declarar lo que, por oponerse al sagrado depósito

de la fe y de las costumbres, les está prohibido bajo pena de separación del gremio de la misma y riesgo de la eterna salvación, si en tal negación continuaren.

Por ello, pues, los metropolitanos y obispos en representación de las provincias eclesiásticas y diócesis constituidas en la República española, para la debida salvaguardia de la fe y costumbres cristianas, estatuímos y declaramos, de conformidad con las leyes canónicas arriba citadas, lo que a continuación se expresa:

1. Sólo es legítimo y válido entre bautizados en la Iglesia católica, aunque el bautizado sea sólo uno de los contrayentes, el matrimonio canónico contraído jurídicamente y sin impedimento alguno ante el Ordinario, párroco propio o sacerdote por los mismos delegado, y dos testigos, salvo lo prevenido en el *Código de Derecho Canónico* para el caso de peligro inminente de muerte.

2. De conformidad con lo preceptuado en el canon 1063 § 3, del propio *Código*, no es lícita la comparecencia ante el oficial del Estado para llenar las formalidades prescritas por la misma ley al solo objeto de disfrutar de los efectos civiles del matrimonio. Y aun conviene que esto se practique, para mayor bien de los esposos y de la prole nacadera del matrimonio. Con todo, tengan entendido los católicos que tal acto no les faculta para convivir o cohabitar matrimonialmente, aunque se denomine matrimonio civil o simplemente matrimonio, ya que para los mismos no es sacramento ni matrimonio válido, sino que constituye para ellos simple medio legal de disfrute de los efectos civiles del matrimonio en la sociedad civil.

3. Por tanto, cometería grave culpa moral el fiel cristiano que atentare al matrimonio civil con esperanza de disolverlo después, merced a no reputarlo en el fuero eclesiástico contrato válido; pues con ello no sólo incurriría en simulación inmoral, sino que pecaría contra justicia en perjuicio de su comparte y de la prole.

4. No es lícita a ningún fiel cristiano bautizado en la religión católica la disolución del vínculo conyugal, el cual, por su misma naturaleza, consumado el matrimonio, es perpetuo e indisoluble.

5. Tampoco es lícita la separación perpetua o temporal de los cónyuges sin la autorización del Ordinario en los casos previstos por el Derecho canónico. Tanto de estas causas como

de los de declaración de nulidad del matrimonio, como en la dispensa de nulidad de matrimonios rato y no consumado, deben entender los tribunales eclesíasticos en la forma prevenida por el derecho.

6. Aun quedando en toda su vigor y firmeza lo declarado en el número precedente, en atención a que, cuando existe causa canónica de separación, los católicos tienen derecho a los efectos civiles de ella dimanantes, seguridad de las personas, debida tutela de los intereses materiales y educación, manutención y bien de la prole, la Iglesia no es contraria a tolerar que los fieles utilicen las leyes civiles para obtener dichos efectos, sin que ello pueda implicar en absoluto tibieza en la firme adhesión debida a la Doctrina católica, ni mengua alguna en su deber de atenerse a la disciplina eclesíástica y de procurar, para bien de la religión y de la patria, que sean abrogadas las leyes contrarias a la santidad del matrimonio y respetados a la Iglesia los derechos que por ley divina le competen.

Por tanto, y a fin de evitar a los fieles el despildeo de tiempo y los mayores gastos que un doble proceso judicial en la forma ordinaria importaría, mientras la Santa Sede no dispusiere algo en contrario, se tolera que aquellos puedan introducir la causa de mera separación ante los tribunales civiles, con tal que obtengan previamente la autorización o licencia del Ordinario propio, quien, para concederla, deberá cerciorarse, mediante información sumaria, de que existe causa canónica para la separación.

Cuando la especial gravedad o índole del caso exigiere un trámite urgente para obtener la necesaria seguridad de las personas y de los bienes, deberán los fieles exponerlo reservadamente al Ordinario, quien, atendida la gravísima y urgente necesidad, podrá otorgarles un plazo prudencial para que se inscriba la previa información sumaria de que se ha hecho mérito.

No obstante la tolerancia otorgada, será digna de grande aprecio y alabanza la conducta de aquellos fieles que, bien penetrados de la eficacia de la disciplina eclesíástica, aun para la mayor prosperidad de la sociedad civil y defensa del bien conyugal y familiar, den más acendrada prueba de respeto y acatamiento a la autoridad de la Iglesia, simultaneando los procesos o pleitos de mera separación ante los tribunales eclesíasticos y civiles, y todavía mejor, procurando, en cuanto fuese factible, que la decisión eclesíástica sirva para su conciencia de guía segura en la prosecución del pleito civil. Por su parte, los Ordinarios pondrán su mayor interés en facilitar a los fieles

este proceder ejemplar, asegurando que la tramitación de la Curia sea lo más rápida posible y aceptando que las costas de los juicios ante la misma ventilados sean abonadas solamente por aquellos que buenamente quieran o puedan satisfacerlas.

7. Las anteriores normas y orientaciones deberán observar, en el consejo que dieren y en la dirección, cooperación y auxilio que prestaren, los abogados y procuradores de las partes, como quienes más de cerca han de influir en que la sustanciación de las causas matrimoniales ante los tribunales civiles sea sin perjuicio de la indisolubilidad del vínculo y de la observancia de las leyes eclesiásticas y en que los fieles sientan debidamente que las obligaciones y cargos de su conciencia pertenecen a un fuero anterior y superior a la ley civil.

8. El fiel cristiano que, en su calidad de funcionario público, deba aplicar las leyes civiles, podrá hacerlo con arreglo a las mismas, cuidando, empero, de salvaguardar su conciencia aplicando las normas de los probados autores de sana moral.

9. En todo caso de separación, aunque el otro cónyuge atentare nuevo enlace civil, es deber del consorte cristiano cuidar, en la medida de su fuerza, de la cristiana educación y hasta del bien temporal de la prole, y de procurar con suave y cristiana caridad, con oración asidua y constante y con el buen ejemplo y dignidad de vida, la conversión del otro cónyuge, al que continúa unido por vínculo matrimonial y por la dulce eficacia de la gracia, la que Dios nuestro Señor confiere constantemente mientras no se ponga óbice a la misma.

10. No teman los cónyuges cristianos separados de sus consortes el llevar una vida de absoluta continencia, por cuanto, como declara el sagrado concilio Tridentino, repitiendo conceptos del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nuestro Señor, que permite en el hombre las contrariedades y tentaciones, no niega semejante gracia cuando le es humilde y sinceramente pedida, siendo, además, la vida casta y pura, en la respectiva situación en que el hombre se encuentra, la mejor garantía para la fecunda prosperidad del individuo y de la sociedad.

11. Tengan, por último, entendido todas y cualesquiera personas que de palabra, por escrito o por obra, contradijeren los cánones de la Iglesia antes reseñados, o sea los que los enseñaren o en cualquier forma sostuvieron no ser necesario para la unión conyugal de los fieles bautizados en la Iglesia católica el matrimonio canónico celebrado legítimamente de conformidad a sus leyes y prescripciones, o que el vínculo matrimonial es disoluble, o atentaren nuevo matrimonio viviendo el primer consorte, o pidieren la disolución total del vínculo,

o a ellos prestaren su cooperación y ministerio, salvo lo permitido en las declaraciones que preceden, que, además de incurrir en grave pecado, quedan en cierto modo separados del gremio de la Iglesia, en la cual solo podrán ser recibidos mediante sincero arrepentimiento. En su virtud, todos los comprendidos en esta declaración no podrán participar en actos públicos eclesiales, ni formar parte de asociaciones y corporaciones canónicas, ni ser padrinos de bautismo y confirmación, ni intervenir en actos religiosos, ni ser enterrados religiosamente. La Iglesia, madre piadosa, no niega en la última hora y, con tal que exista verdadero arrepentimiento, en ninguna ocasión de la vida, los sacramentos necesarios para la salvación; pero no podrán tener entierro católico, aunque en su última hora hubiesen recibido la absolución, aquellos bautizados que, pudiendo hacerlo, no hubiesen procedido en su conversión con publicidad suficiente para reparar el escándalo, asegurando un cambio de vida para lo sucesivo.

Al formular estas declaraciones, como obligación ineludible que nos impone el ministerio que tenemos confiado en la Iglesia de Cristo, bajo la dirección suprema del Pontífice Romano, los metropolitanos y obispos representantes de las provincias eclesiales y diócesis de España hemos de rogar por el mismo Jesucristo, Dios y Señor nuestro, recordando los méritos en favor de todos los hombres, con su preciosa sangre contraidos, a los fieles cristianos constituidos en el estado conyugal o que aspiran a él, que con su vida ejemplar y digna en todos los órdenes de la existencia, incluso el civil, den verdadero testimonio de la fe que profesan y de su dignidad de cristianos, tanto en sus costumbres como en el régimen de la familia y educación de la prole, cual conviene a quienes miran esta vida temporal como preparación de la eterna. El matrimonio cristiano ha sido, en toda época, fuente primaria de una fecunda y robusta vida social; la justicia y caridad practicadas en la propia familia, la mutua paciencia, inspirada no sólo por conveniencias terrenas, sino por el ideal superior de la fidelidad a Dios, la verdadera unidad e indisolubilidad de la vida conyugal, trascienden siempre a todas las esferas sociales y son elemento primordial y necesario para que, fortalecido el hombre con lo que practica en su propia familia, propugne en las demás esferas, realizándolos por su parte, el imperio de la paz, del trabajo, de la caridad y de la justicia. Exhortamos, finalmente, a todos los párrocos y encargados de la cura de almas de nuestra respectiva jurisdicción, a que, sin discutir ni hacer objeto de controversia hechos ajenos a su ministerio, enseñen claramente a los fieles la doctrina de la Iglesia sobre el estado conyugal, tan luminosa y oportunamente expuesta en las grandes encíclicas *Arcanum divinae*, de León XIII, y *Casti connubii*, del actual Pontífice reinante, y a que, secundando sus deseos y siguiendo sus enseñanzas, procuren por todos los medios a su alcance que sea conocida y observada la santidad del matrimonio cristiano.

Dadas en la fiesta de San Jaime, 25 de julio de 1932.

12. - Normas particulares a los Parrocos de la provincia tarraconense.

ECÉ de Barcelona, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 15, págs. 315-317.

"La ley de 28 de junio del corriente año, publicada en la Gaceta de Madrid, del día 3 de julio, dice terminantemente en su artículo 1º: "A partir de la vigencia de la presente Ley solo se reconoce una forma de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a lo dispuesto en las secciones primera y segunda del capítulo 2º del título 4º del Libro 1º del Código civil..." con las modificaciones que indica a continuación el mismo artículo.

Dicha ley empieza a regir, en virtud de lo que establece su artículo 5º, el próximo día 3 de agosto.

El concepto que deba merecer a los católicos el llamado matrimonio civil, desde el punto de vista dogmático, moral y canónico, queda suficientemente expuesto en la anterior Instrucción que suscriben los Rdmos. Metropolitanos. Sin perjuicio, pues, de la doctrina en ella sentada, que es la enseñada en todo tiempo por la Iglesia; y ateniéndose puramente al nuevo sistema que de hecho viene a crear en España la repetida Ley, los Prelados de esta Provincia eclesiástica hemos acordado publicar las siguientes normas, a que en adelante deberán los Parrocos atenerse para la autorización de matrimonios.

1ª Tengase como norma general, que la legislación española concordada ha cesado plenamente, o quedado sin efecto como consecuencia de las múltiples disposiciones del nuevo régimen contrarias a los derechos de la Iglesia. En su virtud la disciplina eclesiástica en España debe regularse totalmente por el derecho común, o sea por el código de Derecho canónico.

2ª En particular, en materia matrimonial, quedan sin efecto, o deben tenerse por derogadas, todas las disposiciones anteriores del Poder civil (sean propiamente civiles, penales o militares), en lo referente al matrimonio canónico. Es asimismo consecuencia del hecho de no reconocer la ley otro matrimonio que el llamado civil dejando por lo mismo el matrimonio canónico sin efectos civiles de ninguna clase.

32 Desde el próximo día 1 se celebrará el matrimonio canónico sin el previo aviso que, según el artículo 77 del Código civil, debía darse al Juzgado municipal, para los efectos de la inmediata inscripción en el Registro civil.

41 No podrán los Parrocos, desde igual fecha, autorizar actas de consentimiento o consejo paterno, con efectos civiles para el matrimonio, ni exigirán a los contrayentes las tales actas, autorizadas por los correspondientes funcionarios civiles, para acreditar la licencia o consejo en los expedientes de matrimonio canónico.

51 La ley eclesiástica sobre este particular está contenida en el canon 1034 del Código, que dice: "Amoneste el Párroco seriamente a los hijos de familia menores de edad que no celebren las nupcias sin saberlo sus padres, o contra la voluntad razonable de ellos; y si no la acatasen no asista al tal matrimonio sin consultar antes al Ordinario". A todos los efectos canónicos, son mayores de edad los que han cumplido veinte años sean de 19.

62 En el matrimonio de los menores, en sentido canónico, se guardará rigurosamente la prescripción del canon 1034 v, para mayor garantía, se hará constar la conformidad del padre o, en su defecto, de la madre, en una breve acta que autorizara el Párroco y unirá al expediente.

72 Para evitar posibles conflictos, conviene exigir esta conformidad para todos los contrayentes que no sean civilmente mayores de edad, aunque lo sean según el Código canónico. Si el padre, o aquellos a quienes corresponda otorgar el consentimiento según la Ley civil, se oponen al matrimonio, acudase al Ordinario para la resolución oportuna.

81 Es muy conforme al espíritu cristiano que la intervención de los padres, dando su licencia o consejo, se observe aun en el matrimonio de los hijos mayores. Procurara, pues, el Párroco que así sea; pero, en caso de oposición, y tratándose de contrayentes mayores según ambos derechos, después de hechas las reflexiones pertinentes, pasara adelante, si otra cosa no obstare.

92 La situación del contrayente con relación al servicio militar, en nada obsta a la celebración del matrimonio canónico. Pero si el mozo estuviere en servicio activo, no sería el Párroco de la

1970

jurisdiccion ordinaria sino el castrense, quien, previos los tramites correspondientes, deberia autorizarlo.

102 En la partida de matrimonio se omitira la referencia a los requisitos civiles, que figura en el formulario, y se dira simplemente: "... previas las tres moniciones... y los demas requisitos canonicos para la validez y legitimidad del contrato sacramental..."

Dadas el dia 12 de Agosto de 1962.

+ F. Card. Vidal y Barraquer, Arzobispo de Tarragona.- + Valentin, Obispo de Solisna.-
+ Justino, Obispo de Tortosa.- + Jose, Obispo de Gerona.- + Manuel, Obispo de Barcelona, A.A. de Lerida.- + Juan, Obispo de Nish.

13.- Circular del Prelado.

S. f., *BOE de Huesca*, año 81, 1 de agosto de 1932, núm. 8, págs. 175-176.

Estando próxima la implantación de la ley llamada del matrimonio civil, la cual comenzará a cumplirse desde el próximo día tres de agosto, NOS creemos en la necesidad de dirigir NOS al Venerable Clero parroquial de NUESTRA amada Diócesis, para hacerle algunas advertencias, que puedan servir al mismo tiempo de orientación para los Rdos. Párrocos, y de instrucción, en materia tan interesante, para todos los fieles; para aquéllos, con el fin de que puedan desempeñar más autorizadamente la misión de maestros, guías y directores espirituales de sus feligreses; para éstos, porque recibirán así la verdadera doctrina de la Iglesia, y tendrán seguridad en sus conciencias, sujetándose a ellas con espíritu filial, en la certeza de que solamente cumpliendo las normas de la Iglesia Católica pueden alcanzar su eterna salvación, y en este mundo la tranquilidad de la conciencia, y la felicidad del hogar cristiano.

Siendo el matrimonio entre cristianos, no un mero contrato con fines terrenos, sino un Sacramento, signo y causa de la gracia, dignidad a la que Jesucristo Nuestro Señor se dignó elevarlo, para santificar así toda la vida individual y social; es evidente que, de una parte, toda la legislación que al matrimonio entre cristianos se refiere, corresponde «*iure proprio*», e independientemente del reconocimiento que del mismo pudiese hacer el poder civil, a la Iglesia Católica, única depositaria de la doctrina y del tesoro de las gracias que el Divino Fundador le confió; y de otra parte, siguese lógicamente, que entre cristianos no hay otra forma válida de matrimonio, ni como sacramento, ni aun como contrato, más que *el matrimonio canónico*; siendo el llamado matrimonio civil, entre bautizados, una fórmula o requisito que la ley civil exige para fines meramente temporales y civiles.

Pongan, pues, los Rdos. Párrocos y Encargados de Parroquias todo interés en instruir al pueblo en esta materia, indicandoles la necesidad que tienen de celebrar su matrimonio con arreglo a las leyes eclesíásticas, no pudiendo hacer vida común, sin pecado mortal habitual, los que verifiquen el contrato civil sin haber santificado su unión por medio del matrimonio canónico; exponiéndose además a las penas eclesíásticas, que la Iglesia impone a los que desobedecen sus leyes en asunto tan importante y grave, que supone su santificación y la de sus hijos.

Y para que NUESTROS sacerdotes sepan a qué atenerse en esta materia, les advertimos:

PRIMERO: Procuren los Párrocos que todos los fieles hagan preceder el matrimonio canónico a la ceremonia civil; cuando haya ocurrido lo contrario, consulten a NUESTRA Curia sobre lo que proceda al celebrarse el matrimonio canónico, sin perjuicio de advertir y amonestar a los así unidos la obligación que tienen de vivir separados y de contraer matrimonio cuanto antes para evitar el escándalo o repararlo si ya se dió.

SEGUNDO: Adviertan los Párrocos a sus fieles que deben acudir, después del matrimonio canónico, al juzgado para la ceremonia civil, a fin de que se libren de los inconvenientes que pudiesen padecer por no hacerlo.

TERCERO: Para las diligencias matrimoniales, aténganse los Párrocos al Código Canónico y disposiciones eclesásticas vigentes en esta Diócesis, teniendo en cuenta que la «fé de soltería» ya no es necesaria, y que el consentimiento paternal no es preciso que se exprese por escrito, pero tengan en cuenta el canon 1.034 sobre matrimonios de menores.

CUARTO: Cuando, lo que Dios no permita, tuviesen que bautizar e inscribir hijos de casados civilmente, podrán y deberán consignar en la partida los nombres de los padres, expresando que se hallan casados civilmente, y sin calificar de legítimos a los hijos.

QUINTO. En todos los casos dudosos, o más graves, deberán consultar a NUESTRA Curia episcopal.

† Fr. MATEO, Obispo de Huusca.

13.1.- Circular núm. 136.- Instrucciones acerca del matrimonio entre católicos.

8 de agosto de 1932, *BOE de Vitoria*, año 58, 10 de agosto de 1932, núm. extraordinario, págs. 401-408.

(Léase al pueblo fiel).

Desde el día 3 de este mes de agosto está en vigor la «Ley del matrimonio civil» que en su primer artículo declara que «a partir de la vigencia de la misma sólo se reconoce una forma de matrimonio, el civil» y en el último establece que «quedan derogadas todas las disposiciones legales que a ella se opongan» y por tanto las del Código civil hasta ahora vigentes que reconocían dos formas de matrimonio y establecían que todos los que profesaren la Religión católica debían contraer el matrimonio canónico que producía según la ley todos los efectos civiles, respecto de las personas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes, con sola su inscripción en el Registro a cuyo solo fin prescribía la asistencia del Juez al acto de la celebración del matrimonio canónico.

Por virtud de la nueva disposición legal ya no producirá efectos civiles el Sacramento del matrimonio celebrado en la forma que prescribe la Santa Iglesia para todos los bautizados en el seno de ella, o sea expresando su consentimiento matrimonial, por regla general, ante el párroco y dos testigos: sino que será necesario, para obtener dichos efectos civiles, que los católicos comparezcan también ante el Juez municipal y dos testigos y manifiesten también ante ellos su consentimiento matrimonial.

Con este motivo creemos deber sagrado de Nuestra pastoral ministerio recordar a nuestros amadísimos diocesanos los principales puntos de la doctrina católica acerca del verdadero matrimonio entre cristianos y darles normas prácticas para que a ellas ajusten su conducta en esta materia.

«Cosa bien conocida de todos es, decía el inmortal León XIII en su encíclica *ARCANUM*, cual es el origen del verdadero matrimonio... y que teniendo éste por autor a Dios y habiendo sido desde el principio sombra y figura de la Encarnación del Verbo divino por eso mismo reviste un carácter sagrado, no adventicio sino ingénito, no recibido de los hombres sino impresso por la misma naturaleza». El matrimonio, por su propia índole, pertenece al orden sagrado y religioso. «Esto atestiguan, añade dicha encíclica, los monumentos de la antigüedad, y los usos y costumbres de los pueblos que mayor conocimiento tuvieron del derecho y de la equidad. Por esa causa celebraban entre ellos sus

bodas con las ceremonias propias de su religión mediando la autoridad de su pontífice y el ministerio de sus sacerdotes. ¡Tanta fuerza—dice—ejercían en sus ánimos, privados por otra parte de la revelación sobrenatural, la memoria del origen del matrimonio y la conciencia del género humano!.

Y si este carácter religioso y sagrado es propio de todo matrimonio, lo es de una manera especialísima del matrimonio contraído entre cristianos, porque Jesucristo Redentor del hombre y restaurador de su dignidad le elevó a la categoría de Sacramento de la nueva Ley que confiriese a los casados la gracia con que santamente viviesen y criasen y educasen nuevos miembros de su cuerpo místico que es la Iglesia y futuros moradores del cielo.

Y fué el mismo contrato matrimonial legítimo entre cristianos el que Jesucristo elevó a la dignidad de Sacramento y por eso, dice el mismo Pontífice en la repetida encíclica, en el matrimonio entre cristianos no puede separarse el contrato del Sacramento, ni existe entre ellos verdadero y legítimo contrato matrimonial sin ser por el mismo hecho Sacramento. Son entre bautizados una misma cosa realmente el contrato matrimonial y el Sacramento del matrimonio y, por consiguiente, donde no hay Sacramento no puede haber entre católicos contrato matrimonial verdadero, ni viceversa.

No es el matrimonio entre cristianos un contrato puramente humano al que después de celebrado legítimamente sobrevenga extrínsecamente, como cierto ornato o propiedad, la cualidad del Sacramento, como pretendieron Marco Antonio de Dominis, Nütz y otros cuyas opiniones fueron condenadas por la Iglesia: sacramento y contrato matrimonial entre bautizados son cosas intrínsecamente unidas y esencialmente inseparables por la voluntad de Jesucristo Redentor y Legislador de los hombres; y en virtud de ella el mutuo consentimiento matrimonial de los contrayentes dado en legítima forma contiene todos los elementos esenciales del Sacramento y del contrato y realiza al mismo tiempo uno y otro. Los mismos contrayentes son por eso mismo los ministros de este Sacramento del matrimonio y no lo es del Sacerdote, que sólo asiste como testigo autorizado del mismo y para invocar sobre los casados las bendiciones de Dios y de la Iglesia.

Por tanto, no puede haber entre cristianos otro matrimonio válido y verdadero que produzca el vínculo matrimonial y haga lícita la vida marital de los mismos, que el Sacramento del matrimonio celebrado según la ley de Dios y de la Iglesia, única depositaria de todos los Sacramentos. Toda otra unión marital entre cristianos es contraria a la ley de Dios y por tanto pecado y cuando el hecho de esa unión marital extrasacramental sea público, público será también el pecado en materia del sexto precepto a los efectos de incurrir en las sanciones que los sagrados cánones imponen en castigo de tales pecados a los súbditos de la Santa Iglesia.

Y si el matrimonio entre bautizados es un verdadero Sacramento que no puede separarse del contrato matrimonial legítimo que contiene su materia y forma, sólo la Iglesia es exclusivamente competente para regir el matrimonio de los cristianos tanto en cuanto al contrato como en cuanto al vínculo permanente que de él resulta, porque sólo a la Iglesia encomendó Cristo sus Sacramentos y sólo ella es exclusivamente competente, por voluntad divina, en cuanto concierne a los Sacramentos de la nueva Ley.

Por consiguiente, sólo la Iglesia puede determinar la forma en que ha de celebrarse el contrato matrimonial de sus fieles, sólo ella es competente para establecer impedimentos del matrimonio entre cristianos, para determinar las causas de disolución o separación del mismo, salvo el derecho divino de la perpetuidad e indisolubilidad del vínculo del matrimonio consumado entre fieles hasta la muerte de uno de los cónyuges, y para conocer judicialmente de las causas matrimoniales, que exclusivamente competen a ella, en cuanto no se refieran de una manera principal a efectos puramente civiles del matrimonio, de los cuales conoce la potestad civil.

Esta es la doctrina constantemente enseñada por la Santa Iglesia, singularmente en el santo Concilio de Trento (*sess. XXIV, c. 4*) en el *Syllabus* (*prop. 67-72 y 74*) en las encíclicas *Interium*, de León XIII y *Casti connubii* de Pío XI, y en las disposiciones del Código de Derecho Canónico (c. 1012, 1016, 1061).

Según esta doctrina, tratándose de matrimonio entre cristianos, no pueden los Poderes civiles legislar acerca de la esencia y validez de su matrimonio, ni establecer impedimentos del mismo, ni disolver o separar su matrimonio canónicamente contraído o declarar la nulidad del mismo, ni en general decretar nada que afecte al contrato mismo o al vínculo matrimonial o a los que con estos está íntima e inseparablemente unido, v. gr. la legitimidad de los hijos y los derechos que de ella resultan.

Y así lo entendieron y practicaron, por ley general, los Poderes civiles cristianos que, por lo común se limitaron a reconocer efectos civiles a los actos puestos según la ley canónica en materia matrimonial.

«Aun más, dice León XIII en la citada encíclica, tan lejos estuvieron de arrogarse la potestad sobre los matrimonios cristianos que más bien reconocieron y declararon que pertenecía a la Iglesia. Efectivamente, añade, Honorio, Teodosio el Joven, Justiniano, no dudaron confesar que en cuanto decia relación a los matrimonios no les era lícito ser otra cosa que custodios y defensores de los sagrados cánones. Y si promulgaron algunos edictos acerca de impedimentos matrimoniales dijeron paladinamente que lo habían hecho con permiso y autoridad de la Iglesia cuyo juicio acostumbraron a inquirir y reverenciar en las controversias de honestidad, de nacimiento, de divorcios y finalmente de todo lo que en cualquier forma tuviese relación con el vínculo conyugal».

No niega la Iglesia a los Poderes civiles, antes al contrario expresamente les reconoce *in toto, tota* la facultad de regular los efectos meramente civiles del matrimonio de los cristianos, legislando v. gr. sobre capitulaciones matrimoniales, régimen de bienes, donaciones *inter conjuges*, alimentos, legítimas etc.

En estos postulados de la doctrina católica estaba basada por regla general la legislación civil hasta ahora vigente entre nosotros respecto del matrimonio. La ley del matrimonio civil promulgada el 3 de julio último no reconoce otra forma de matrimonio para todos, sin distinción de bautizados y no bautizados, que la del matrimonio civil.

La Iglesia, por su parte, no puede reconocer, según su doctrina, la validez de ningún matrimonio contraído entre cristianos—ni como contrato, ni como Sacramento—que no haya sido celebrado con los requisitos esenciales que ella exige. Por tanto sólo puede ver en el llamado matrimonio civil entre bautizados una mera ceremonia o requisito que la potestad civil exige para que el matrimonio produzca ciertos efectos civiles.

En consonancia con esta doctrina de la Iglesia que tenemos el deber de enseñar a Nuestros fieles, y teniendo en cuenta las resoluciones dadas por la Santa Sede en circunstancias análogas a las nuestras, mirando sólo al bien de nuestros amadísimos diócesanos y queriendo ayudar a Nuestros venerables cooperadores los Sres. párrocos en el ejercicio de su ministerio, que Nos han pedido con urgencia instrucciones, creemos oportuno dictar las siguientes:

1.° Los Sres. párrocos enseñaran a los fieles que, establecido por dicha ley como obligatorio el matrimonio civil para obtener los efectos civiles, no deben conformarse con contraer sólo el matrimonio canónico sino que han de procurar también realizar la ceremonia civil impuesta para dichos efectos por la nueva ley; advirtiéndoles que esto no sólo les es lícito en este caso sino, por ley general, obligatorio en virtud de la ley de caridad que obliga a evitar los daños graves que de la omisión de ella pudieran seguirse a los cónyuges y a sus descendientes. Si en algún caso intentaren contraer matrimonio canónico los que no pudieren o no quisieren celebrar la ceremonia civil deberán los Sres. párrocos ponerlo oportunamente en Nuestro conocimiento (*Inst. de la S. Pont. a los Obispos de Italia, 15 enero 1886; S. C. pro Neg. Extraord. a los Obispos de la Argentina, 20 febrero 1889 y S. C. de Sacra entos, 30 junio 1917*).

2.° Deben los Sres. Párrocos advertir diligentemente a sus fieles que al comparecer ante el Juez para realizar dicha ceremonia no les es lícito ir con la intención de celebrar verdadero y válido matrimonio; y que han de ir a ella con la

sola intención de cumplir un requisito que la ley les exige para que su matrimonio canónico tenga efectos civiles y con la de evitar de esta suerte los graves daños que de lo tener dichos efectos pudieran seguirse a ellos y a sus descendientes.

3.^a Han de procurar los Sres. Curas que la celebración del matrimonio canónico preceda a la ceremonia civil y que, a poder ser, los recién casados comparezcan ante el Juez INMEDIATAMENTE DESPUES de terminada la Misa de velaciones y a continuación de la ceremonia religiosa en el caso de que el Matrimonio se celebre cuando estén cerradas las velaciones y no hubieren obtenido licencia para tenerlas.

4.^a A este efecto han de procurar también los Sres. Curas que se tramiten simultaneamente los dos expedientes matrimoniales, el canónico y el civil, a fin de que, concluidos oportunamente los dos, no haya dificultad alguna para que el matrimonio se contraiga en la forma que se indica en la instrucción anterior.

5.^a Si en algún caso celebrasen los católicos el llamado matrimonio civil ANTES DEL CANÓNICO se les exhortará en el Señor a que cuanto antes se casen canónicamente (*Inst. de la S. S. Penit. 15 enero 1866, num. 7.*) y a que entretanto vivan completamente separados; y les advertirán con toda claridad que mientras así no lo hicieren y si públicamente y notoriamente vivieren como casados, además de estar en pecado y ofensa de Dios, quedarán excluidos de los actos legítimos eclesiásticos enumerados en el canon 2236 (1), mientras no dieren señales de verdadero arrepentimiento; y que no podrán ser válidamente admitidos en las Asociaciones pías (*lc. 605*) ni recibir los Santos Sacramentos (*lc. 855 y 602*), ni recibir a su muerte cristiana sepultura si antes no dieren señales de penitencia (*lc. 1240, párr. 1.^o num. 6*); que estarán afectos a impedimento de pública honestidad (*lc. 1078*); que sus hijos, como canónicamente ilegítimos, serán irregulares (*lc. 984*) y que no podrá la mujer recibir la bendición *post partum*.

6.^a Aunque procederán muy laudablemente los contrayentes mayores de edad pidiendo la bendición y el consejo de sus padres para su matrimonio no se exigirá en lo sucesivo documento alguno acreditativo de dicho consejo a quienes hubieren cumplido veintifés años.

7.^a Se amonestará gravemente a los menores de dicha edad a que cumplan con la obligación a que se refiere el

(1) Tales son: el de administrar bienes eclesiásticos, de ejercer los cargos de ...ecogado, procurador y alguacil en causas eclesiásticas, padrino en el bautismo o confirmación y el ejercer el derecho de patronato.

canon 1034 del Código Canónico de no contraer los menores matrimonio sin consultar con sus padres, ni mucho menos contra la prohibición razonable de los mismos y en caso de negarse a ello acudirán a Nos en consulta los Sres. Curas, como lo dispone dicho canon, absteniéndose de asistir al matrimonio mientras no reciban respuesta.

El cumplimiento de esta obligación se acreditará por declaración verbal o por simple escrito—sin necesidad de acta notarial—el cual se archivará por separado. En el expediente canónico sólo se pondrá una diligencia en que se haga constar que se ha cumplido lo prescrito en el canon 1034.

Los contrayentes menores de edad, en defecto de sus padres, no tienen tal obligación canónica en orden a sus abuelos y consejos de familia.

8.º Tampoco se exigirá en lo sucesivo en los expedientes canónicos la llamada «fe de soltería», expedida por la autoridad militar.

Bugedo, 8 de agosto de 1932.

† MATEO, OBISPO DE VITORIA.

13.2.-Provisorato y Vicaría general del obispado.-

Instrucciones sobre la celebración del matrimonio.

10 de agosto de 1932, *BOE de León*, 15 de agosto de 1932, núm. 12, págs. 275-280.

En el número de este Boletín correspondiente al 30 de Julio ppdo., insertamos la Ley sobre el matrimonio civil, aprobada en las Cortes Constituyentes, publicada en la «Gaceta» del 3 del expresado Julio, y vigente en nuestra patria desde el día 3 del corriente mes de Agosto.

Bien conocidos son de nuestro Clero los principios canónico dogmáticos que deben presidir y regular el contrato matrimonial válido, entre bautizados, elevado a la dignidad de Sacramento por Jesucristo. Nuestro Señor que, a la vez, confirió a la Iglesia la exclusiva competencia en la ordenación válida y lícita del matrimonio cristiano. Más como la nueva Ley al reconocer sólo una forma de matrimonio; el civil, y negar al matrimonio canónico los efectos civiles que hasta ahora se le venían reconociendo, crea una situación legal que no puede ni debe ser ignorada por los Sacerdotes, hemos juzgado de grandísima utilidad práctica consignar con claridad y precisión, las normas a que ha de atenerse el Clero diocesano para cumplir bien su cometido en la materia que motiva esta Circular.

Al indicado objeto, y procediendo por mandato especial de nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, publicamos las siguientes Instrucciones:

PRIMERA.—En la tramitación de los expedientes matrimoniales, los Rvdos. Sres. Curas Párrocos, Ecónomos y demás Sacerdotes Encargados de parroquias en nuestra Diócesis, prescindirán, en lo sucesivo, de las disposiciones civiles relativas a la licencia o consentimiento paternos para el matrimonio de los menores de edad, y sólo deberán tener en cuenta el contenido del can. 1.034 del Código de Derecho Canónico: «Parochus graviter filiosfamilias minores hortetur ne nuptias ineant, insciis aut rationabiliter invitis parentibus; quod si abnuerint eorum matrimonio ne assistat, nisi consulto prius Loci Ordinario». Son menores de edad por Derecho Canónico, los que no han cumplido 21 años (can. 88). En defecto de los padres, los contrayentes menores de edad no están obligados, canónicamente, a contar con sus abuelos o con el Consejo de Familia. Ni es necesario

para el cumplimiento de lo preceptuado en el can. 1.034 que este punto se acredite por documento o acta notarial, en la forma que antes se exigía: basta solamente que le conste al Párroco por manifestación verbal de los padres de los contrayentes, o por un simple escrito de los mismos, de cuya autenticidad el Párroco pueda responder. Este escrito deberá ser archivado separadamente.

Cuando fuere necesario acreditar este extremo ante otro Párroco, distinto de aquel ante quien los padres hayan hecho tales manifestaciones, será suficiente una simple certificación de este último Párroco en la que se haga constar que se ha cumplido el can. 1.034; también podrá consignarse este dato en la certificación de lectura de proclamas, cuando estas hubieren sido leídas por el mismo Párroco. En igual forma deberá acreditarse este extremo en los expedientes matrimoniales que se instruyan en esta Vicaría General.

Aunque es muy laudable que los contrayentes, mayores de edad, pidan y obtengan de sus padres el consejo para contraer matrimonio, y en este sentido deban ser exhortados por los Sres. Párrocos, sin embargo, no se les exigirá documento alguno que acredite haber obtenido el consejo paterno favorable.

SEGUNDA.—No reconociendo la nueva Ley civil la forma canónica del matrimonio, cesa la obligación que el artículo 77 del Código civil impone a los contrayentes respecto del aviso al Juzgado, así como la obligación que impone al párroco de no proceder a la celebración del matrimonio sin la presentación del recibo de aquel aviso.

TERCERA.—No se exigirá en los expedientes matrimoniales canónicos la llamada «Fe de soltería», ni documento alguno con el que el contrayente acredite no estar afecto a la prohibición matrimonial establecida en la legislación militar vigente.

CUARTO.—Permaneciendo en todo su vigor las disposiciones y privilegios pontificios, relativos a la jurisdicción Castrense, los expedientes matrimoniales de súbditos de esta jurisdicción se instruirán, en lo sucesivo, en igual forma que se venían instruyendo hasta el presente; si bien, disuelto el Cuerpo Eclesiástico del Ejército y desaparecida la entidad Teniente-Vicarío Castrense, los Sres. párrocos e interesados se comunicarán directamente, para todos estos asuntos, con el Excmo. Señor Patriarca de las Indias, —García de Paredes, 41, Madrid.

QUINTA.—Los Rvdos. Señores Curas enseñarán a los

fieles, con la mayor solicitud y diligencia, que, entre cristianos, no puede darse verdadero matrimonio sin que a la vez sea sacramento; y que no es lícita ni válida, para los católicos, otra forma de matrimonio que la prescrita por Nuestra Santa Madre la Iglesia. De suerte que para conciliar en lo posible la doctrina católica sobre el Sacramento del matrimonio con lo que dispone la Ley sobre el matrimonio civil, deberán los párrocos inculcar con la mayor simeza a sus feligreses, que, antes de comparecer ante el Juez municipal a practicar la ceremonia civil para conseguir los efectos civiles del matrimonio, contraigan el matrimonio canónico según prescribe la Iglesia.

Sexta.—Si en algún caso tuviere lugar la ceremonia civil antes de celebrarse el matrimonio canónico, deberán saber los fieles que pecan mortalmente si hacen vida marital antes de contraer el verdadero matrimonio sacramento. Y si, lo que Dios no permita, hubiese quienes se limitasen a practicar la ceremonia civil, haciendo caso omiso del matrimonio canónico, e hiciesen vida marital, se les exhortará con toda caridad a que cuanto antes salgan de tan lamentable estado, advirtiéndoles que, mientras permanezcan en él, si el hecho es público están excluidos de los actos legítimos eclesiásticos, enumerados en el canon 2.256; no pueden ser admitidos en Asociaciones religiosas (can. 693); ni recibir los Santos Sacramentos (can. 855 y 942); ni, a su muerte, sepultura eclesiástica, a no ser que antes de morir dieran señales de penitencia (can. 1.240); que sus hijos serían irregulares (can. 984); y que a ella no podría darse la bendición *post partum* (Sag. Cong. de Rit. 18 de Junio de 1859).

Séptima.—Con anterioridad a la publicación de la nueva Ley, el Gobierno de la República había dispuesto que, para contraer matrimonio civil, no era necesario que los contrayentes hiciesen declaración de no profesar la Religión Católica. De ahí que no puedan ser considerados como apóstatas los contrayentes, por el hecho de haber contraído sólo el matrimonio civil. Por consiguiente, si estos casados sólo civilmente, continúan llamándose católicos y practican actos de Religión, entrando en la iglesia, oyendo Misa los días festivos etcétera, etcétera, e intentan contraer entre sí matrimonio canónico, pueden los Párrocos autorizarlo, sin acudir al Ordinario. Pero si los casados civilmente hubiesen incurrido también en apostasía, declarando con palabras o con hechos haber roto todo vínculo con la Religión, y arrepentidos, quisiesen casarse canónicamente, los Párrocos deberán acudir a esta Vicaría General para recibir las instrucciones oportunas.

Octava.—En cuanto a la inscripción de la partida de Bautismo de los hijos nacidos de los unidos sólo civil

mente, si bien, al tenor del can. 1.114, tales hijos no pueden menos de ser considerados como ilegítimos canónicamente, los Párrocos se abstendrán de darles calificativo alguno en lo que a su legitimidad afecta, y consignarán los nombres de los padres, expresando que están casados civilmente:

NOVENA.—En lo que a la Ley de divorcio del 2 de Marzo del año actual afecta, los Sres. Curas deberán tener muy presente que, como declara el can. 1.960, del Código de Derecho Canónico resumiendo la doctrina expuesta en multitud de documentos eclesásticos, «Causae matrimoniales inter baptizatos [sunt] proprio et exclusivo ad iudicem ecclesiasticum spectantes». No tienen, por consiguiente, valor alguno ante la Iglesia las sentencias de nulidad de matrimonio canónico dictadas por los tribunales civiles; sólo que como dijo la Sagrada Penitenciaría en la «Instrucción sobre el contrato que llaman matrimonio civil», publicada en 15 de Enero de 1866: «Toda sentencia de separación de cónyuges unidos en legítimo matrimonio ante la Iglesia, pronunciada por una autoridad laica sería de ningún valor; y el cónyuge que abusando de tal sentencia, se atreviese a unirse con otra persona, sería un verdadero adúltero...»

DÉCIMA.—En las certificaciones de partidas sacramentales y de defunción que los Sres. Curas expidan para ser remitidas a las oficinas de este Obispado, deberán consignar, al final, antes de la fecha y firma, estas palabras «...Y para que surta efectos en la Curia Diocesana expido la presente...»

Finalmente, exhortamos y ordenamos a los Sres. Curas la fiel observancia de estas instrucciones, ya que de su exacto cumplimiento esperamos también que sean menores los daños que, en el orden espiritual, se sigan de la nueva Ley sobre el matrimonio civil.

León, 10 de Agosto de 1932.

DR. FERNANDO ALVAREZ RODRIGUEZ

14. Vicaría y provisorato general del Arzobispado.

S.I., *BGE de Burgos*, año 75, 16 de agosto de 1932, núm. 16, págs. 268-272.

Como aclaración y complemento de las precedentes normas de los Baudales, Metropolitano, de acuerdo, en un todo, con Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo, este Provisorato estima conveniente publicar algunas reglas relacionadas con la forma de autorizar en la sucesión los matrimonios ecónomicos los señores Curas párrocos y Encargados de Iglesias de este Arzobispado.

I.^a Siendo invariable la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio cristiano, y bien claros y precisos los principios católicos sobre esta materia, es de importancia suma recordar a los señores Curas el encargo formulado en el canon 1018 del Código eclesiástico, el cual dice: «Parochus ne omittat monitum prudenter erudire de matrimonio sacramento et sine impedimentis», que el Párroco explique a sus feligreses, con prudencia, delicadeza y respeto, la naturaleza y propiedades del matrimonio cristiano, los impedimentos matrimoniales, la forma de celebrar el sacramento del matrimonio ecónomico, que es solamente el que, cumplidos todos los requisitos necesarios, contraen los bautizados «in facie Ecclesiae».

II.^a Como la nueva Ley aprobada en las Cortes dispone en su artículo 1.^o que solo reconoce una forma de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a las leyes civiles, entre las cuales se encuentra la que ha entrado en vigor desde el día 3 de las corrientes, es lógico deducir: a) que el matrimonio civil, en España, es obligatorio; b) que ante la nueva ley no surte efecto civil alguno el matrimonio canónico; c) que éste, por lo tanto, debe contraerse, exclusivamente, con arreglo a las prescripciones de la Iglesia Católica, las cuales ni exigen presentación de documento que acredite la situación civil del contratante, ni acta de consentimiento o consejo paterno autorizada por Notario o por el Juez municipal.

III.^a Respecto del consejo paterno para el matrimonio ecónomico la legislación eclesiástica dispone, en el canon 1034, que los hijos de familia, menores de edad no deben contraer matrimonio sin conocimiento y sin consejo favorable de sus padres, y que, si la negativa de éstos es razonable, el Párroco consulte el caso con el Prelado diocesano, antes de autorizar el matrimonio. No estará demás el recordar que según la legislación eclesiástica (cann. 83 y 89) son menores de edad aquellos que no han cumplido 21 años, y que la Iglesia reconoce a los que han cumplido esta edad el ejercicio pleno de todos los derechos eccl., sin depender de la patria potestad.

V.* La Iglesia católica no ha modificado su criterio en relación con el matrimonio, ya que sigue defendiendo la santidad y sacramentalidad del matrimonio cristiano y su exclusiva competencia sobre el vínculo matrimonial, reconociendo, sin embargo, alguna intervención al poder civil, en cuanto a los efectos meramente civiles, (Ley. 1015 y 1361) y la facultad de reglamentar los efectos que de la sociedad conyugal surtan en el orden social y económico.

VI.* El estado español, desde la vigencia de la nueva ley, deja de reconocer la legalidad del matrimonio canónico, y no conformándose con que los contrayentes avisen al Juzgado municipal el día, hora y lugar en que se celebre el matrimonio, como se venía haciendo, lo cual ya no es necesario, exige que los esposos instruyan expediente y comparezcan personalmente, prestando su consentimiento matrimonial ante el Juzgado municipal.

VII.* Con el fin de evitar conflictos de conciencia, y deseando prevenir serios disgustos y salir al paso de lamentables consecuencias, tanto en el orden espiritual como en el social, legal y económico, los señores Curas insistirán ante los contrayentes en que éstos tienen obligación grave de celebrar su matrimonio ante el Párroco propio de la feligresía; pero que si no quieren verse privados del amparo y protección del poder civil y soportar los perjuicios que sobrevengan, deben comparecer también ante los Juzgados municipales, a los efectos legales.

VIII.* Para los contrayentes que quieran continuar siendo hijos sumisos de la Iglesia y fieles cumplidores de las enseñanzas y preceptos de ésta, y deseen proseguir en el disfrute de los derechos y beneficios espirituales, es imprescindible la celebración del matrimonio canónico en la forma determinada por la Iglesia, si es posible en el mismo día y antes que el llamado matrimonio civil, sobre todo antes de la convivencia conyugal, pues si conviven maritalmente con sólo el civil cometen pecado grave. Por esto es de desear que los fieles no sólo se desposen canónicamente, sino que cumplan el deseo de la Iglesia de velarse en los tiempos permitidos por las sagradas Rúbricas.

VIII.* La Iglesia recomienda también el cumplimiento de la ceremonia civil introducida por la ley, y es obligatorio para los consortes ese acto de expedienteo y comparecencia personal ante el Juzgado municipal, si quieren inscribir en el nuevo Registro civil el matrimonio contruido; a condición de que su comparecencia ante el mencionado Juzgado no tenga en su ánimo otro alcance que el de cumplir una ceremonia puramente civil. A esto fin a) transcribimos la norma dada por la Seg. Penitenciaria en su instrucción de 15 de Enero de 1936 que dice: «Ad vexationes vitandas et ob proliis bonum, quae aliquin a

laica potestate ut legitima non haberetur, tum etiam ad polygamiæ periculum averendum, oportunitatem et expediens videretur ut fideles postquam matrimonium legitimum contraxerint coram Ecclesia, se sistant actum lege decretum executuri, ea tamen intentione, ut docet Benedictus XIV, ut sistendo Gubernii officiali, nihil aliud faciant quam ut civilem caerimoniam exequantur». b) Recomendamos con verdadero interés la lectura principalmente de las normas 6.ª y 7.ª de dicha Instrucción Apostólica que se halla traducida al castellano en el Boletín de este Arzobispado, tomo XII, págs. 156-7-8 y 9, año 1869.

IX.º No es de absoluta necesidad que el matrimonio canónico se celebre antes que el civil, aun cuando es muy recomendable la precedencia del canónico, en lo que han de poner gran empeño los señores Curas; procurando que los dos se celebren el mismo día. Redoblen sus esfuerzos, y con caridad y celo empleen todos los medios de persuasión que estén a su alcance para impedir que sus feligreses se conformen con el civil solamente; en este caso, si sucede en esta Archidiócesis, ya saben los señores Curas encargados de Iglesias en este Arzobispado las sanciones que la Iglesia impone a los que se hallen en esas circunstancias; la luminosa instrucción de los Revdmos. Metropolitanos, que precede, los conocimientos del Clero diocesano, acerca de la doctrina teológica y moral de la Iglesia y lo que disponen los sagrados cánones en esta materia, relevan a este Provisorato de ulteriores normas e instrucciones, pudiendo consultarse con aprovechamiento, los siguientes cánones del Código eclesiástico: 693; 766; 767; 855; 984; 985; 1.012; 1.013; 1.043; 1.078; 1.091; 1.110; 1.114; 1.118; 1.123 al 32; 1.240, párrafo 6.º; 1.960; 1.961 y 2.037, párrafo 2.º

X.º Cuatro son los casos que en esta materia pueden ocurrir, con más frecuencia, en el desempeño del cargo parroquial y gobierno espiritual de los pueblos:

1.º Cuando los casados civilmente, sin matrimonio canónico, pidan la administración del santo Bautismo para el hijo nacido.

2.º Cuando los desposados canónicamente pueden y no quieran comparecer ante el Juzgado municipal, con el fin exclusivo de cumplir la ceremonia del matrimonio civil, e inscribir su matrimonio en el libro abierto en el Registro de los juzgados municipales.

3.º El caso de aquellos que quieren celebrar los dos matrimonios, y no pueden según la Ley formalizar la ceremonia del matrimonio civil.

4.º El de aquellos que habiendo celebrado el matrimonio civil se conformen con este, sin ofreciendo la celebración del canónico, manifestando positivamente que no quieren contraerle.

Contestamos al primer caso, diciendo que no tengan inconveniente alguno en administrar el Bautismo, variando el formulario diocesano en el entable de la partida, diciendo:

«Es hijo de N... N... y J... N... casados civilmente.

En el 2.º caso decimos que no solo es licito el cumplimiento de la ceremonia civil, sino obligatoria indirectamente, para evitar los graves daños y perjuicios a que se exponen los contrayentes, los hijos y el mismo matrimonio canónico.

La contestación al 3.º y 4.º caso depende de diversas circunstancias, y por eso los señores Curas expondrán al Revdmo. Prelado el caso con sus circunstancias y obrarán en conformidad con la resolución del mismo.

Burgos 3 de Agosto de 1932.

El Provisor y Vicario General,
Domingo Roberto Roca.

14.1. - Reglas prácticas de S. Emcia Rvdma. a los Párrocos
acerca de la celebración del matrimonio canónico.

BOE de Sevilla, año 75, 20 de agosto de 1932, num. 1209, págs. 233-235

Estando de hecho vigente la ley del matrimonio civil promulgada en fecha 3 de julio del presente año, según la cual sólo el llamado matrimonio civil produce efectos civiles ante la ley, juzgamos procedente dictar las siguientes instrucciones prácticas para Nuestra diócesis:

1.ª Aunque para los fieles cristianos—según en la preinsera instrucción del Episcopado se enseña—no hay otro matrimonio válido en conciencia más que el matrimonio canónico celebrado según las leyes de la Santa Iglesia; sin embargo, a fin de que éstos no se vean privados del reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio y aun para evitar peligros de que algún cónyuge desleal intente otro matrimonio y desconozca civilmente a su legítima consorte, es de suma conveniencia que los fieles se presenten al Juez civil para celebrar la ceremonia del llamado matrimonio civil, con tal que la intención sea solamente cumplir con una ceremonia externa impuesta por la legislación civil, necesaria para que no se vean privados de los efectos civiles temporales del matrimonio.

2.ª Los fieles deben procurar que la celebración del matrimonio canónico preceda a la del llamado matrimonio civil.

3.ª Si por algún motivo extraordinario o circunstancia excepcional acudiesen los fieles ante el Juez para la ceremonia del llamado matrimonio civil antes que hayan contraído el matrimonio canónico, háganlo con sólo la intención de cumplir una ceremonia externa legal; pero deben, a ser posible el mismo día, recibir el santo sacramento del matrimonio contrayendo éste ante el Párroco en la forma canónica para contraer válido matrimonio ante Dios, ante la Iglesia y la conciencia cristiana, y sepan que es gravemente pecaminoso hacer vida marital antes de contraer matrimonio canónico.

4.ª Si ocurriera en algún caso existencia de algún impedimento de carácter civil que no esté entre los establecidos por la Iglesia, absteniéndose los Párrocos de autorizar el matrimonio canónico sin consultar antes al Prelado, exponiendo los motivos por los que se pretende contraer matrimonio canónico a pesar de no poder obtener reconocimiento de efectos civiles ese matrimonio en dicho caso.

5.ª La ley de la Iglesia en el canon 1034 establece lo siguiente: «Exhorte el Párroco gravemente a los hijos de familia menores de edad (éstos son según el canon 88 los que no han cumplido 21 años) para que no contraigan matrimonio sin saberlo sus padres u opuniéndose éstos razonablemente; y si aquéllos se obstinan en no cumplir este requisito, no asista a su matrimonio sin consultar primero al Ordinario». Cuando de cualquier modo conste ciertamente al Párroco que los menores de edad tienen el consentimiento de sus padres para el matrimonio canónico que intentan, será suficiente expresar en el expediente que se ha cumplido con lo dispuesto en el canon 1034. No hay necesidad de acta notarial del consentimiento.

6.ª Para evitar posibles conflictos, conviene exigir esta conformidad para los contrayentes que no sean *civilmente* mayores de edad, aunque lo sean según el Código canónico. Si el padre, o aquellos a quienes correspondía otorgar el consentimiento según la Ley civil, se oponen al matrimonio, acúdase al «Ordinario» para la resolución oportuna.

7.ª Es muy conforme al espíritu cristiano que la intervención de los padres, usando su beneplacito, se observe aun en el matrimonio de los hijos mayores. Procurara, pues, el Párroco que así sea; pero después de hechas las reflexiones pertinentes, pasará adelante, si otra cosa no obstaré.

8.ª La situación del contrayente con relación al servicio militar, en nada obata a la celebración del matrimonio canónico. Pero si el mozo estuviere en servicio activo, no sería sólo el Párroco de la jurisdicción ordinaria, sino también la jurisdicción eclesiástica castrense, quien, previos los trámites correspondientes, debería autorizarlo.

Sevilla día 16 de Agosto de 1932

† EL CARDENAL ARZOBISPO DE SEVILLA

14.2.- 10 de septiembre de 1932. Reglas prácticas a los
Sres. Curas Parrocos relativas a la celebracion
del matrimonio canonico.

EE de Navarra, año 71, 16 de septiembre de 1932, num. 18, pags. 314-316.

La vigencia de la nueva ley acerca del matrimonio civil desde el 3 de agosto proximo pasado, al reconocer una sola forma de matrimonio, el civil, y derogar las disposiciones legales contrarias, establece un cambio radical que ha suscitado ciertas dudas y consultas muy atendibles y justificadas. Para resolverlas, dejando a un lado la cuestion doctrinal expuesta en la Instruccion colectiva del Episcopado y publicada en el *Boletin eclesiastico oficial del Arzobispado* correspondiente al 16 de agosto de este año, se dan las siguientes normas practicas:

1a. Segun la doctrina catolica, no hay otro matrimonio valido en conciencia más que el canonico, celebrado conforme a las leyes de la Iglesia, ya que entre cristianos no es separable el contrato del sacramento; pero a nadie se le oculta que, una vez realizado el matrimonio canonico, conviene anadir a este acto la observancia de las formalidades prescritas por el Estado a fin de que el casamiento produzca efectos civiles. Mas aun, lo juzgamos necesario para evitar que la malicia de algun conyuge perjudique gravemente al otro y a los hijos, abandonando a su legitimo consorte y atentando en el orden civil nupcias con otra persona, nupcias a las cuales se otorgarian los derechos civiles. A fin de prevenir estos males, procuren los señores Parrocos que se tramiten simultaneamente los dos expedientes canonico y civil de suerte que no haya dificultad alguna para que se contraiga primero el matrimonio canonico y a continuacion o poco despues el acto civil, que realizaran con la sola intencion de cumplir un requisito exigido por la ley.

2a. Como consecuencia de lo dicho, no debe invertirse el orden y celebrar la ceremonia civil antes que el matrimonio canonico y si por algun motivo extraordinario o circunstancia excepcional acudiesen antes al Juez, deben contraer matrimonio canonico ante el Parroco y en la forma debida, a ser posible el mismo dia. De no hacerla asi "interim contrahentes sejuncti consistent". (S.

Penitenciaria 15 enero 1866). Los que no se conformen con la separacion y dilaten la celebracion del matrimonio canonico, quedan equiparados a los comprendidos en el numero siguiente.

43. Los que realicen el acto civil sin contraer matrimonio canonico, si hacen vida conyugal y esto es publico, a tener de los sagrados canones, no podran recibir la E. Comunión (can. 855); quedaran excluidos de los actos legitimos eclesiasticos (a saber, ser padrinos del bautismo, de la confirmacion, ejercer el derecho de patronato, tener cargos honorificos en la Iglesia, etc. Can. 2.126, 127, 2.128, 2.129); no podran ser admitidos ni continuar en las Hermandades y Asociaciones religiosas (can. 693); si mueren sin dar señales de arrepentimiento seran privados de sepultura eclesiastica (can. 1.240); de sufragios publicos por su alma (can. 1.241) y las mujeres no tendran derecho a la bendicion *post partum* (S.C. de Ritos, 18 junio 1859). Los hijos habidos de esta union, canonicamente no son legitimos y en consecuencia son irregulares (can. 934) y, concurriendo la circunstancia antedicha de vida publica marital, se origina el impedimento de publica honestidad que dirime el matrimonio en el primero y segundo grado de linea directa entre el varon y los consaguineos de la mujer y viceversa. Por eso deberan exhortarseles con la mayor caridad a que cuanto antes se casen ante la Iglesia.

44. Perogadas en la actualidad todas las disposiciones anteriores del poder civil y desconocido por el estado el matrimonio canonico, en adelante los expedientes matrimoniales deberan tramitarse unicamente con arreglo a las leyes canonicas. Por lo tanto, se prescindira: 1) del previo aviso al Juzgado Municipal (art. 77 delCodigo civil); 2) de la llamada *re de solteria*, aunque debe averiguarse si el contrayente esta en servicio activo por pertenecer en tal caso a la jurisdiccion eclesiastica castrense la tramitacion del expediente y la autorizacion del matrimonio; 3) se prescindira asimismo del acta de consejo paterno para los mayores de edad; 4) En cuanto a los menores de edad, se les amonestara gravemente para que cumplan con la obligacion que les impone el canon 1.034, de no contraer matrimonio ignorandolo los padres o con su oposicion razonable. Se hara constar, pues, por medio de una declaracion verbal o un simple escrito (sin acta notarial), la conformidad del padre o en su

defecto de la madre. Si estos lo niegan, se recurrirá al Prelado para la resolución oportuna.

51. Acerca de los impedimentos de consanguinidad y afinidad en el derecho canónico y civil, si tengan presente que el computo de grados en línea recta es coincidente en ambos, mas no en línea colateral (Cf. can. 90 del Códex y art. 915 del Código Civil). Si ocurriere algun impedimento de carácter civil que no figura entre los fijados por la Iglesia, antes de proceder al matrimonio, ponganlo todo en conocimiento del M. I. Sr. Vicario General y atenganse a su resolución.

52. En lo tocante al divorcio, 1) como declara el can. 1.960, "las causas matrimoniales entre bautizados por derecho propio y exclusivo competen al Juez eclesiástico" al cual deben acudir los católicos cuando haya causa justa de separación, 2) Por lo demás, en las normas 4-11 de la mencionada instrucción colectiva del Episcopado (Boletín oficial, 10 agosto 1962, p. 265-266), hallaran resueltos los puntos principales, debiendo exponer en nuestra Curia las dudas o dificultades que se ofrecieren.

53. Cuando los casados civilmente quieran contraer matrimonio canónico, daran cuenta los señores curas a la Curia eclesiástica por si acaso se hallaren comprendidos en alguno de los casos siguientes: 1) haber declarado que no eran católicos, incurriendo en penas eclesiásticas; 2) haber duda de si hicieron esta declaración; 3) haber contraído el llamado matrimonio civil y después pretender el canónico con distinta persona (S. Penitenciaria, 15 enero 1866, n. 6); 4) rehusar confesarse antes de recibir el sacramento del matrimonio (Canon 1.066).

54. Finalmente, al escribir la partida de bautismo de aquellos niños cuyos padres solo estan unidos civilmente, se abstendran los Parrocos de poner calificativo respecto de la ilegitimidad, aunque deben hacer constar el matrimonio civil: "*Dunmodo tamquam civiliter tantum coniuncti describantur*" (S. Penitenciaria, 2 septiembre 1870). Si despues fueren legitimados por subsiguiente matrimonio, lo consignaran en una nota marginal.

Zaragoza, 10 de septiembre de 1962.

+ EL ARZOBISPO.

14.3. - Administración apostólica del obispado. - Circular dando normas sobre la celebración de matrimonios.

1 de septiembre de 1932, *BOE de Mondoñedo* año 75, 5 de septiembre de 1932, núm. 17, págs. 153-157.

Expuesta por los Rmos. Prelados españoles en la *Instrucción* que se publicó en el número anterior del BOLETIN la doctrina dogmática, moral y canónica sobre el matrimonio, y fijadas por ellos las normas generales que han de regular su celebración, juzgamos oportuno dar las siguientes normas particulares a las que deberán atenerse los Párrocos en esta materia:

1.º Los expedientes matrimoniales canónicos se tramitarán exclusivamente conforme a las prescripciones de los cánones 1019 y siguientes del Código de Derecho Canónico. Los Párrocos, al incoar estos expedientes, recomendarán a los interesados que hagan instruir simultáneamente en el Juzgado el expediente civil.

2.º Según las nuevas leyes de la Autoridad civil, en materia matrimonial quedan sin efecto, o deben fenderse por derogadas, todas las disposiciones anteriores del mismo poder civil, sean propias civiles, militares o penales. Por lo tanto:

a) El matrimonio canónico se celebrará en lo sucesivo sin el previo aviso que, con arreglo al art. 77 del Código civil, debía darse al Juzgado para los efectos de la asistencia del juez o su delegado al acto del matrimonio, y de la inmediata inscripción del mismo en el Registro civil.

b) En virtud de la ley del 18 de septiembre de 1931, no se exigirá a los militares la llamada «fe de soltería»; y a los soldados que necesiten todavía según la ley civil la licencia del Capitán General (actualmente General de la División) para contraer matrimonio, se les aconsejará que la pidan y obtengan, para así contraer luego el matrimonio canónico, y después el civil; pero entendiéndose que si el novio estuviere en servicio activo, quien debe instruir el medio expediente del mismo ha de ser el Párroco Castrense, y no el Párroco de la jurisdicción ordinaria, autorizando ambos el matrimonio.

c) No podrán los Párrocos, de ahora en adelante, autorizar actas de consentimiento o consejo paterno con efectos civiles para el matrimonio, ni admitirán las tales actas, expedidas por los correspondientes funcionarios civiles, para acreditar la licencia o consejo en los expedientes de matrimonio canónico.

d) No exigiendo la nueva ley del matrimonio civil el consejo de los padres para los civilmente mayores de edad (los que tienen cumplidos 23 años) que contraigan matrimonio, ni exigiéndolo tampoco el Código Canónico, prescindirán los Párrocos del documento que acredite este consejo, aun cuando sea muy laudable que lo pidan los contrayentes y han de procurar los Párrocos que así lo hagan; pero en caso de oposición, y tratándose de contrayentes mayores de edad según ambos derechos, después de hechas las reflexiones pertinentes, autorizarán el matrimonio, si otra cosa no obstate.

e) En el matrimonio de los canónicamente menores (los que no han cumplido 21 años) se guardará rigurosamente la prescripción del can. 1034, que dice: «Amoneste el Párroco seriamente a los hijos de familia menores de edad que no celebren las nupcias sin saberlo sus padres, o contra la voluntad razonable de ellos; y si no atienden esta monición, no asistirá al matrimonio sin consultar antes al Ordinario».

f) Para el cumplimiento de lo que prescribe el can. 1034 no es necesario que los contrayentes menores presenten documento notarial en la forma que se exigía antes: basta que le conste al Párroco la conformidad del padre, o en su defecto de la madre (no hay obligación canónica de recurrir a los abuelos o al consejo de familia en defecto de los padres, como exige el art. 16 del Código civil), por un simple escrito o por un acta autorizada por el mismo Párroco, la cual se conservará en una carpeta destinada a archivar esta clase de documentos. En el expediente se hará constar simplemente que se ha cumplido el can. 1034.

g) Para evitar posibles conflictos, conviene exigir esta misma conformidad a todos los contrayentes que, aun siendo mayores de edad según el Código Canónico, no lo sean civilmente, es decir, a los que teniendo 21 años no hayan cumplido los 23.

h) En los casos a que se refieren los apartados c), f) y g), si los padres se niegan a otorgar el consentimiento, se acudirá al Ordinario para la resolución oportuna.

3.º El impedimento canónico de pública honestidad no se origina del matrimonio civil (S. C. del Concilio 13 marzo 1870), pero si a él se une pública vida marital, entonces existirá *ex publico et notorio concubinato* el mencionado impedimento canónico, que dirime el matrimonio canónico en el primero y segundo grado de la línea recta entre el varón y los consanguíneos de la mujer, y viceversa (Wernz-Vidal, *Ius Matrimoniale*, n. 377).

4.º Con los que estando civilmente casados y habiendo hecho vida marital quieren contraer matrimonio canónico, se ha de proceder de diferente manera según los casos: a) si no apostataron anteriormente, y han continuado llamándose católicos, oyendo Misa los días festivos, etc., podrán los Párrocos, sin necesidad de consultar al Ordinario, proceder a la celebración del matrimonio canónico de los unidos civilmente; b) mas si éstos apostataron, y manifestaron externamente la apostasia, acudirán los Párrocos al Ordinario, que les dará las oportunas instrucciones y la delegación para recibir la abjuración y la profesión de fe, y para absolver de las penas eclesiásticas incurridas; c) cuando se dude si hubo o no apostasia, se recurrirá igualmente al Ordinario antes de autorizar el matrimonio. En los tres casos anteriores procurarán los Párrocos que *omnitera matrimonium postulant, eo meliori modo quo fieri poterit, separati vivant* (S. *Penitentiaria*, 2 septiembre 1870).

5.º Si, lo que Dios no permita, algún ordenado in sacris o profeso de votos solemnes, o simples perpetuos, se atreviese a llegar a la unión civil, incurriría en las penas del can. 2388.

6.º Podrá suceder que alguno de los casados civilmente quiera contraer matrimonio canónico con persona con la que no pueda unirse civilmente, v. gr., por estar ya casado con otra y no haberse divorciado. En este y otros casos análogos en que sea posible el matrimonio canónico, pero no el civil, los Párrocos no autorizarán el matrimonio sin consultar antes al Ordinario (S. *Penitentiaria* 15 enero 1866).

7.º Los Párrocos, cumpliendo lo dispuesto por la S. C. de Sacramentos en 29 septiembre 1931, procurarán apartar y disuadir a los fieles de pretender sin graves causas dispensas de impedimentos de grado mayor, y en especial del primero, con segundo grado de consanguinidad en la línea colateral, por los peligros e inconvenientes a que están expuestos los que, estando unidos por

estrecho vínculo de parentesco, se hñitan al mismo tiempo separados o distanciados por tanta diferencia de edad, por lo que mucho es de temer padezcan la paz y armonía conyugales y se deriven graves peligros, aun físicos, para los hijos y descendientes que con frecuencia heredan agravados los defectos morales y físicos de los padres, según enseña la ciencia médica.

8.^a Para mayor garantía del vínculo sacramental en orden a los efectos puramente externos y civiles, y con el fin de prevenir que por omisión de la ceremonia civil pueda la malicia de un cónyuge dañar gravemente al otro, abandonándolo y atentando el matrimonio civil con otra persona, a la cual la autoridad civil reconocería los derechos civiles, los Párrocos no asistirán a la celebración de ningún matrimonio canónico, ni lo bendecirán sin que los contrayentes se comprometan a realizar en breve plazo la ceremonia civil (*Instrucción de la S. Penitenciaría*, 15 enero 1866). Y si algunos con causa grave no pudieran o no quisieran celebrar la ceremonia civil, los Párrocos no los admitirán al matrimonio canónico sin consultar el caso con el Ordinario (*Instrucción citada de la S. Penitenciaría*).

9.^a Se procurará que los contrayentes celebren el matrimonio canónico y, si están abiertas las velaciones, asistan a la Misa *pro sponsis* y reciban la bendición nupcial, e inmediatamente después, a ser posible, vayan al Juzgado a practicar la ceremonia prescrita por la ley civil. Si por algún motivo extraordinario o circunstancia excepcional acudiesen los fieles ante el Juez para la unión civil antes que hayan contraído el matrimonio canónico, deben hacerlo con sola la intención de cumplir una ceremonia legal externa, y deben también, a ser posible el mismo día, recibir el santo sacramento del matrimonio.

10.^a Cuando por inconsideración u otras causas celebren los fieles el consorcio civil, y hagan vida marital sin haber contraído canónicamente, se les exhortará en el Señor a que cuanto antes se casen ante la Iglesia (*S. Penitenciaría*, 15 enero 1866), y se les advertirá con toda caridad que, mientras así no lo hicieren, estarán excluidos de los actos legítimos eclesiásticos enumerados en el can. 2256 (no podrán ser padrinos del bautismo ni de la confirmación, ni ejercer el derecho de patronato, ni tener cargos honoríficos en la Iglesia, etc.); no podrán válidamente ser admitidos ni permanecer en las cofradías y asociaciones religiosas (can. 693); ni recibir la Sagrada Comunión (can. 855); ni al ocurrir su fallecimiento podrá darseles sepultura eclesiástica, a no ser que aytes de morir vieran señales de penitencia (can. 1240); ni se podrán aplicar sufragios públicos por sus almas (can. 1241).

11.^a Las mujeres casadas sólo civilmente no tienen derecho a la bendición *post partum*, como declaró la S. C. de Ritos en 18 junio 1859.

12.^a Si se diera el caso de bautizar e inscribir a hijos de los casados sólo civilmente, deberán los Párrocos consignar en la partida que el bautizado es hijo de... (nombre y dos apellidos del padre), y de... (nombre y dos apellidos de la madre), *casados civilmente*. Y se abstendrán de poner ningún calificativo después de la palabra *hijo*. Si más tarde los casados civilmente contrajeran matrimonio canónico, pondrá el Párroco en la partida del bautizado una nota marginal diciendo: Legitimado por el subsiguiente matrimonio canónico de los padres, celebrado el (día, mes y año), en (parroquia en que se casaron).

Mondónedo, 1.º de septiembre de 1932.

V

CAPÍTULO V

LA SECULARIZACIÓN DE CEMENTERIOS Y LA CUESTIÓN DE
LOS ENTERRAMIENTOS

- 1.- Proyecto de ley de secularización de cementerios de 4 diciembre de 1931.

Gaceta de Madrid, núm. 339, 5 de diciembre de 1931, págs. 1444-1445.

- 2.- 8 de abril de 1933. Reglamento para la aplicación de la ley de 30 de enero de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 102, 12 de abril de 1933, págs. 278-281.

- 3.- "Decisiones del Poder Civil. Dictamen sobre incautación y expropiación de cementerios católicos."

25 de abril de 1933, *BOE de Segovia*, año 78, 29 de abril de 1933, núm. 8, págs. 196-204.

- 4.- Circular del Provisorato. "Sobre cementerios parroquiales. Instrucciones relativas al Reglamento publicado en la Gaceta de 12 de Abril."

19 de abril de 1933, *BOE de Oviedo*, año 69, 15 de abril-15 de mayo de 1933, núm. 3, págs. 41-43.

- 5.- "Circular"

S.f., *BOE de Mondoñedo*, año 76, 20 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 81-85.

6.- "Sección civil. Enterramiento de Religiosas."

S.f. *BOE de Tarazona y Tudela*, año 71, 31 de mayo de 1933, núm. 732, págs. 331-342.

7.- "Sobre enterramiento de religiosos."

S.f. *BOE de Toledo*, año 89, 1 de agosto de 1933, núm. 10, págs. 220-225.

8.- "Enterramiento de Religiosas."

S.f. *BOE de Tarazona y Tudela*, año 71, 31 de octubre de 1933, núm. 742, págs. 715-722.

9.- "Se reconoce a las Comunidades Religiosas de Segovia el derecho de inhumación en sus Cementerios."

S.f. *BOE de Segovia*, año 78, 15 de noviembre de 1933, núm. 21, págs. 476-486.

10.- Cánones del Código canonico acerca de cementerios y enterramientos.

11.- Circular sobre entierros religiosos.

14 de febrero de 1932, *BOE de Toledo*, año 88, 16 de febrero de 1932, núm. 4, págs. 56-58.

12.- Instrucciones del Excmo. Sr.

Vicario capitular: Sobre incautación de cementerios y declaración de voluntad de entierro católico.

1 de mayo de 1933, *BOE de Toledo*, año 89, 2 de mayo de 1933, núm. 6, págs. 98-103.

**1.- Proyecto de Ley de secularización de cementerios
de 4 de diciembre de 1931.**

Gaceta de Madrid, núm. 339, 5 de diciembre de 1931, págs. 1444-1445.

A las Cortes constituyentes:

La supeditación en que ha vivido la legislación civil española respecto de la canónica no ha sufrido sustancial modificación desde el siglo XVI; en vano el régimen constitucional adoptaba lemas de progresismo, democracia o liberalismo; nada afectaba a la situación vejatoria a que se sometía al discrepante de la religión oficial en los momentos solemnes de la vida civil. Ser disidente era motivo de sanción aun en la hora de la muerte, pues como tal se ha venido considerando la privación de enterramiento en sagrado.

Mas la República, que hubo de publicar el decreto sobre cementerios fechado en 9 de julio próximo pasado, a fin de impedir la perduración de abusos, cumple hoy con el deber de dar satisfacción absoluta a una de las derivaciones más nobles y puras de la libertad de conciencia, concebida en la unidad de su plenitud: la de no inquirir en la hora de la muerte las creencias religiosas que hubiera profesado el difunto y hacer los cementerios el lugar de la comunidad de los muertos. Sagrados serán siempre los cementerios, independientemente de las ceremonias que en ellos tengan lugar, porque el carácter sacro lo recoge la tierra en que se sepulta a los humanos por el halo de misterio religioso en que va envuelta la muerte y por el respeto y veneración que enciende en el alma el sentimiento de la separación eterna.

Secularizar los cementerios era un imperioso deber civil para el régimen naciente, y es hoy un corolario de los preceptos constitucionarios ya aprobados por las Cortes constituyentes. A fin de dar efectividad a los mismos, el ministro que suscribe tiene el honor de proponer a la Cámara el siguiente proyecto de ley:

Artículo 12 Los cementerios municipales serán comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales. En las portadas se pondrá la inscripción de "Cementerio

Municipal". Los distintos cultos podrán practicar en ellos sus ritos funerarios. Las autoridades harán desaparecer las tapias que separan los cementerios civiles de los católicos cuando sean contiguos. La guarda, conservación y régimen de enterramientos en dichos cementerios corresponde a la autoridad municipal. Los Municipios que no tuvieren cementerio de su propiedad vendrán obligados a construirlo en el plazo que determine la ley.

Art. 22. Los cementerios de carácter privado hoy existentes serán respetados, pero no se autorizará la apertura de ningún otro ni el ensanchamiento de los actuales.

Art. 32. En ningún caso será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas ni en las casas religiosas o en locales anejos a unos y otras.

Art. 42. Corresponde a los padres y tutores determinar la sepultura que haya de darse a los que no alcanzaren la edad para testar. La voluntad expresa del difunto, o en su defecto la interpretación que de ella hicieren sus familiares o causahabientes, será la que decida el carácter del enterramiento.

Madrid, 4 de diciembre de 1931.-

El ministro de Justicia, Fernando de los Rios Urrutí.

2.- 8 de abril de 1933. Reglamento para la aplicación de la ley de 30 de enero de 1932.

Gaceta de Madrid, núm. 102, 12 de abril de 1933, págs. 278-281.

La Ley de 30 de Enero de 1932, que regula materia tan importante como es la secularización de cementerios, plantea en el corto espacio de sus cuatro artículos cuestiones muy delicadas, lo que hace necesaria la publicación de un Reglamento que desenvuelva sus principales disposiciones, haciendo así posible la aplicación de las mismas sin las dudas y dificultades con que inevitablemente se tropieza cuando se trata de llevar a la práctica una innovación de tanta trascendencia.

Es preciso que dicho Reglamento desarrolle, según su propio espíritu, algunas normas esbozadas en la Ley, que en el tiempo que ésta lleva de vigencia se ha podido ver que no han sido bien interpretadas y hace falta también que establezca procedimientos rápidos y sencillos para que los Ayuntamientos puedan cumplir las nuevas obligaciones que sobre ellos pesan y ejercitar los derechos que se les conceden. Probablemente de esta necesidad es lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley, que en su párrafo último se refiere a las bases que ha de establecer el Poder ejecutivo para regular la expropiación de los cementerios.

En este primer artículo, contiene la Ley disposiciones de gran importancia, que deben ser desmenuzadas y articuladas en el Reglamento a fin de evitar que puedan ser desvirtuadas en la práctica, y para facilitar su aplicación con un procedimiento que no contenga innecesarias complicaciones.

Ha de contener, por lo tanto, el Reglamento normas en las que se consigne de un modo expreso que no cumplen los Municipios la obligación que la Ley les impone construyendo un solo cementerio municipal, sino que han de construir todos los que sean necesarios, atendidas las circunstancias de cada caso concreto. También ha de establecerse en el Reglamento un procedimiento para solicitar la prórroga del plazo de un año que la Ley concede para la construcción de dichos cementerios municipales.

En el mismo artículo 1.º de la Ley se trata de una materia que requiere una reglamentación ya más minuciosa: la incautación y expropiación de los cementerios parroquiales.

Aunque el texto legal está claro, y es evidente que, según él, los Municipios pueden incautarse, desde luego, de los cementerios particulares y de aque-

llos que de hecho prestan el servicio de cementerios generales, sin esperar a que sean previamente expropiados, se hace preciso consignarlo de un modo claro en el Reglamento, para disipar las dudas que en este punto se han manifestado, al mismo tiempo que se dictan reglas para la incautación. Esta ha de verificarse en forma tal, que nadie pueda poner traba al cumplimiento del acuerdo municipal; pero al mismo tiempo debe concederse a los dueños de los cementerios incautados las garantías necesarias para la defensa de su derecho. Verificada la incautación, cuando no se plantea cuestión alguna acerca de la propiedad del cementerio incautado o cuando las planteadas hayan sido resueltas por los Tribunales ordinarios, únicos competentes para ello, habrá que proceder a la expropiación de aquellos cementerios que no pertenecían a los Municipios. El Reglamento, en este punto, ha de establecer reglas más sencillas que las contenidas en la Ley de 10 de Enero de 1879, siquiera se inspire, como no podía menos, en muchos de sus preceptos. Hay que tener en cuenta que algunas de las cuestiones que se presentan en el caso de la expropiación ordinaria no pueden plantearse cuando se trata de la expropiación de un cementerio que ha sido ocupado ya. Bastará, pues, con dejar debidamente garantizados los deseos de los interesados, Municipio y propietario del cementerio, estableciendo un procedimiento breve en el que ambos tengan la necesaria intervención y concediéndoles los recursos oportunos ante los Tribunales de la Contencioso-administrativa.

Ha de ser regulado también en el Reglamento un punto importante relativo a los cementerios privados. Según el artículo 2.º de la Ley de 30 de Enero de 1932, dichos cementerios serán respetados, pero no se autorizará la apertura de otros nuevos ni la ampliación de los actuales. En el texto legal no se hace mención alguna de cierta clase de cementerios privados que existen en España, que tuvieron su razón de ser cuando todos los demás eran estrictamente confessionales, pero que ya hoy no son necesarios porque ha desaparecido la causa a que deben su origen. Son estos cementerios los construidos por ciudadanos de algunas naciones extranjeras, ingleses principalmente, para poder ser enterrados con arreglo a su confesión religiosa.

Es evidente que, en lo sucesivo, no debe concederse a los extranjeros la facultad de construir nuevos cementerios privados permitiéndoles lo que no se permite a los nacionales; pero no sería justo tampoco clausurar los que ahora hacen o hacen imposible de hacer el enterramiento en los sitios exigidos que los que en ellos figura a ser edificados figuren en las listas análogas a las dadas en el párrafo tercero del artículo 2.º de la Ley. La solución más equitativa será la de permitir que tales cementerios sigan prestando servicio como hasta ahora, pero sin autorizar otros enterramientos en ellos más que los de aquellas personas que en vida hubieren tenido la ciudadanía y pertenecido a la confesión religiosa de los fundadores del cementerio. Cuando los cementerios después no puedan ya prestar servicio sería clausurarlos y no se permitiría la construcción de otros nuevos que tengan el mismo carácter.

Solución análoga debe dar el Reglamento al problema que plantea la existencia de cementerios moros y hebreos en nuestras plazas africanas de Ceuta y Melilla.

Las cuestiones más delicadas que plantea la Ley de 29 de Enero de 1872, son, sin duda, las relativas al modo de manifestar la voluntad respecto al carácter que han de tener los enterramientos.

En este punto el Reglamento debe facilitar todo lo posible el modo de manifestar la voluntad de los particulares sin que pueda dar lugar a dudas, evitando que la verdadera expresión de la voluntad pueda ser suplida por declaraciones apócrifas. Para conseguir este propósito debe el Reglamento establecer varios medios al alcance de los interesados, pudiendo éstos utilizar en cada caso concreto aquel que más les convenga o que les sea más fácil. Entre estos medios está, en primer lugar, la creación de un Registro especial que sin ser incorporado al Registro civil sea llenado por los notarios funcionarios. En este Registro podrán los que así lo deseen, hacer constar con todas las garantías necesarias su voluntad en cuanto al carácter que haya de tener su propio enterramiento.

No es el Registro especial el único medio que han de tener a su alcance los particulares para expresar su voluntad en cuanto al carácter de su propio enterramiento. El Reglamento debe contener otros que ofrezcan todos ellos las necesarias garantías de autenticidad. Entre estos medios ha de figurar el testamento válido, y aun el testamento que carezca de validez por falta

de solemnidades legales, si por él puede conocerse la verdadera voluntad del testador, pues no exigiendo la Ley que la declaración relativa al carácter del enterramiento esté sometida a formalidades especiales, sería contrario a su espíritu anular dicha declaración cuando está contenida en un testamento que solo es nulo por falta de requisitos de pura forma.

Si bien el Reglamento debe facilitar todo lo posible la manifestación de la voluntad de los particulares en cuanto al carácter de su enterramiento, debe también evitar que esta voluntad pueda ser suplida, o que pueda ser obviada una declaración que no responda a la voluntad verdadera. Para evitar, en cuanto cabe hacerlo, que esto ocurra, el Reglamento no puede admitir como manifestación suficiente la contenida en un escrito que no sea de puño y letra del interesado y que sólo lleve su firma, si además no interviene en la declaración otras personas.

Ha de resolver también el Reglamento las cuestiones que plantea el párrafo segundo de la Ley. Estas cuestiones son dos: la primera, no prevista en la Ley, es la de saber cómo se resuelven las dudas que pueden plantearse cuando entre los parientes del menor de veinte años o del incapaz, llamados a interpretar su voluntad, no existe acuerdo; la segunda cuestión es la de fijar el modo de declarar su voluntad los incapaces.

En cuanto a la primera cuestión, debe el Reglamento someter la resolución de las dudas que se presenten a falta de acuerdo entre los parientes del menor o del demente, al Juez municipal, después de oír sin solemnidades inútiles a dichos parientes en una comparecencia. Para la segunda, no cabe más solución que la de adoptar el mismo criterio que adopta el Código civil para los testamentos de los dementes otorgados en un intervalo lúcido.

Cuando de un modo auténtico se conoce la voluntad de una persona respecto al carácter religioso de su enterramiento, debe hacerse constar en el Reglamento que es consecuencia de la declaración, en primer lugar, que la sepultura pueda contener inscripciones y signos adecuados a su carácter, y, en segundo, que en dicha sepultura puedan practicarse los ritos funerarios de la confesión religiosa a que perteneció en vida el difunto. Nada puede contener, en cambio, el Reglamento acerca de la conducción del cadáver hasta el cementerio, pues la manifestación religiosa a que dicha conducción pueda dar lugar, debe ser considerada como una de tantas manifesta-

ciones de esa clase y regulada en las disposiciones legales que a ellas se refieren y no en un Reglamento destinado únicamente a la aplicación de la Ley de secularización de cementerios.

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, ha sido redactado el adjunto proyecto de Reglamento y, en su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de Enero de 1932.

Dado en Madrid a ocho de Abril de mil novecientos treinta y tres.

NICOLÁS ALCALÁ-ZAMORA Y CORREA

El Ministro de Justicia,

ALVARO DE AROCA-RIZ Y LIMINIANA

REGLAMENTO

para la aplicación de la Ley de 30 de Enero de 1932.

CAPÍTULO PRIMERO

De los cementerios municipales.

Artículo 1.º Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 30 de Enero de 1932, habrá en cada Municipio, por lo menos, un cementerio municipal. Cuando por la extensión del territorio, por el número de habitantes o por otras causas no baste un solo cementerio municipal para las necesidades del Municipio, los Ayuntamientos están obligados a construir o habilitar todos los que sean precisos.

Artículo 2.º En la portada de los cementerios municipales se colocará la inscripción de "Cementerio municipal", en forma que sea claramente legible. No se permitirá ninguna otra inscripción ni signo alguno de carácter religioso en ningún lugar del cementerio, salvo lo dispuesto en el artículo 41 de este Reglamento.

Artículo 3.º Los Ayuntamientos tendrán a su cargo todo lo relativo a la guarda, administración, conservación y régimen de enterramientos en los cementerios municipales, consignando en sus presupuestos las cantidades necesarias para el cumplimiento de estos fines.

Artículo 4.º Los Municipios que no tengan cementerio propio y no puedan construirlo dentro del plazo de un año que establece el artículo 1.º de la Ley de 30 de Enero de 1932, solicitarán la prórroga a que se refiere dicho texto legal.

Para obtener la prórroga, los Ayuntamientos dirigiran una solicitud al Gobierno, en la que señalarán el plazo que estiman necesario para poder construir el cementerio, y a la que acompañarán una certificación expedida por el Secretario, con el visto bueno del Alcalde, en la que se haga constar la situación económica del Municipio y los recursos con que cuenta para la construcción del cementerio y un dictamen pericial acerca del importe aproximado del rubro. Podrá acompañarse también cuantos datos sirvan para fijar la duración de la prórroga solicitada.

La solicitud, con los documentos que la acompañen, se dirigirá al Ministro de la Gobernación. Este la someterá a informe de la Dirección general de Administración local y la enviará luego al Consejo de Ministros, que resolverá en definitiva, denegando la concesión de la prórroga o concediéndola por el tiempo que considere oportuno.

Artículo 5.º Cuando la Autoridad municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.º de la Ley de 30 de Enero de 1932, haya desaparecido las tapas que separan los cementerios civiles de los confesionales contiguos, derribarán las citadas tapas en toda su extensión, convirtiendo los dos cementerios en un solo recinto. Si en dichas tapas existieren nichos ocupados, se trasladarán los restos que continga de acuerdo con los familiares de los difuntos y con sujeción a lo establecido en las disposiciones vigentes. Cuando por cualquier razón no fuera posible realizar la exhumación, se conservará la parte de tapa que fuere precisa para la conservación de los nichos, derribándola después que la exhumación haya podido llevarse a cabo.

CAPÍTULO II

De la inhumación y expropiación de los cementerios parroquiales.

Artículo 6.º Los Municipios podrán inculcarse de los cementerios parroquiales y de aquellos otros que de hecho presten el servicio de cementerio general, no sólo cuando carecen de cementerio propio, sino también cuando la inhumación sea necesaria o muy conveniente, atendidas las circunstancias de cada caso concreto.

Artículo 7.º Para llevar a cabo la inhumación, el Ayuntamiento, al tomar su acuerdo, fijará el día y la hora en que haya de verificarse, y lo notificará a la persona que figura como dueño del cementerio o a su representante legal.

Artículo 8.º El día fijado y a la hora señalada, se procederá a la inhumación por la Autoridad municipal, con asistencia del Secretario del Ayuntamiento, que levantará acta, en la que consignará el hecho de la inhumación, las incidencias a que pueda dar lugar y las manifestaciones que crean oportuno hacer, tanto la Autoridad municipal como el dueño del cementerio o su representante legal.

Artículo 9.º Si el dueño del cementerio o su representante legal no asistieren al acto de la inhumación, éste se llevará a efecto, haciendo constar dicha circunstancia en el acta. La Autoridad municipal podrá en todo caso solicitar la cooperación de otras Autoridades cuando lo estime oportuno para vencer la resistencia que a la inhumación pueda oponerse por el dueño del cementerio o por cualesquiera otras personas.

Artículo 10.º Una vez llevada a cabo la inhumación, los dueños o los que se crean dueños del cementerio inculcado, presentarán al Ayuntamiento los títulos en que funden su derecho o copia fehaciente de los mismos. El Ayuntamiento, en vista de estos títulos y de los demás datos y pruebas de que pueda tener conoci-

mento, decidirá si considerará o no propietario del cementerio al que pretende vender. Si el Ayuntamiento acuerda considerarlo como propietario del cementerio al que alega esta condición, procederá, desde luego, a la expropiación, en la forma que determinan los artículos siguientes. En otro caso, el Ayuntamiento no iniciará el expediente de expropiación hasta que por los Tribunales civiles, en el juicio declarativo que corresponda, no se haya dictado sentencia firme acerca de la propiedad del cementerio inculcado.

Artículo 11. Cuando haya de procederse a la expropiación de un cementerio inculcado, el Ayuntamiento intentará la adquisición por convenio con el dueño, al que dirigirá por medio del Alcalde una hoja de apreciación, en la que constará la cantidad que está dispuesto a abonarle por todos conceptos y libre de toda clase de gastos. Si el dueño la aceptare, se procederá al pago de la cantidad fijada, haciéndose la entrega por el Alcalde ante Notario.

Si después de haber manifestado su aceptación, el dueño del cementerio se negare a aceptar la cantidad convenida, se consignará ésta a su disposición en el Juzgado de primera instancia, siendo de cargo de dicho dueño todos los gastos de la consignación.

Artículo 12. Cuando el dueño del cementerio inculcado no aceptare el ofrecimiento del Ayuntamiento, quedará obligado a presentar otra hoja de tasación, en la que se contenga la apreciación que crea justa y que deberá ser entregada al Ayuntamiento, a fin de que éste resuelva lo que estime más conveniente.

Artículo 13. Si el Ayuntamiento está conforme con la hoja de tasación del dueño del cementerio inculcado, procederá al pago de la cantidad señalada, en la forma establecida en el artículo 11. En otro caso, el Ayuntamiento requerirá al dueño del cementerio para que, de común acuerdo, designen un perito que fije la cantidad que debe ser pagada. A falta de acuerdo, hará la designación de perito el Juez de primera instancia. El Juez hará la designación dentro del plazo de ocho días, a contar de aquel en que se le requiera para ello por el Ayuntamiento o por el dueño del cementerio. Si el perito designado no aceptare el nombramiento, el Juez hará nueva designación, también dentro del plazo de ocho días, contados desde que el perito haya puesto en su conocimiento la renuncia.

Artículo 14. Se entenderá que el Ayuntamiento no está conforme con la hoja de tasación del dueño del cementerio, cuando deje transcurrir quince días después de haberla recibido sin manifestar que la acepta. En este caso, el dueño del cementerio podrá acudir desde luego al Juez de primera instancia solicitando el nombramiento de perito.

Artículo 15. Una vez el perito designado por el Juez haya aceptado el cargo, le entregará el Ayuntamiento y el dueño del cementerio sus respectivas hojas de tasación, a las que podrán acompañar cuantos elementos de juicio estimen oportunos para la mayor ilustración del perito. Con estos datos y los que el Juez considere pertinentes, el perito procederá a redactar su hoja de tasación, para lo que dispondrá de un plazo de quince días, que a su petición podrá ampliar el Juez por otros quince.

Artículo 16. El perito entregará al Juez de primera instancia su hoja de tasación y dos copias de la misma. El Juez, al día siguiente de recibirla, entregará una copia al Ayuntamiento y otra al dueño del cementerio inculcado, previniéndoles para que dentro del plazo de ocho días la manifiesten por escrito si están o no conformes con la hoja de tasación del perito. El interesado que dentro del citado plazo no haga manifestación alguna, se entenderá que acepta la tasación pericial.

Artículo 17. Si ambos interesados aceptan la hoja de tasación del perito, el Juez de primera instancia, dentro del plazo de cinco días, pondrá en conocimiento de cada uno de ellos la conformidad del otro. Dicho plazo se contará a partir del día de la presentación del último escrito manifestando la conformidad, o desde que hayan transcurrido los ocho días a que se refiere el artículo anterior, sin que uno de los interesados o ambos hicieren manifestación alguna.

El pago de la cantidad fijada por el perito y aceptada por los interesados, se hará en la forma que determina el artículo 11.

Artículo 18. Si no hubiere acuerdo entre los interesados, el Juez de primera instancia remitirá el expediente al Gobernador. Este, dentro del plazo de treinta días y por resolución motivada, oyendo a la Diputación provincial o Corporación que la sustituya, determinará el importe de la cantidad que haya de pagarse por la expropiación. Dicha cantidad se fijará dentro precisamente del máximo y del mínimo que hayan señalado los interesados y el perito designado por el Juez.

La resolución del Gobernador se comunicará a los interesados, y si estos estuvieren conformes con ella, se procederá en la forma establecida en el artículo 11.

Artículo 19. Contra la resolución del Gobernador procede el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial, tanto por vicio sustancial en los trámites que establece este Reglamento como por lesión en la apreciación del valor del cementerio expropiado, si dicha lesión representa cuando menos la sexta parte del verdadero justo precio.

CAPÍTULO III

De los cementerios privados.

Artículo 20. Los Ayuntamientos procederán a formar en el más breve plazo posible un inventario de todos los cementerios privados que existan dentro del término municipal.

Artículo 21. Formado el inventario a que se refiere el artículo anterior, los Ayuntamientos que aun no hubiesen cumplido lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 2.º de la Ley de 30 de Enero de 1932, dispondrán, en el plazo que dicho párrafo fija, la revisión de derechos establecidos hasta la fecha de la Ley para los inhumaciones, determinando cuáles sean y a qué personas corresponden.

Artículo 22. Para verificar la revisión a que se refiere el artículo anterior, los Ayuntamientos se dirigirán a los dueños de los cementerios privados o a quienes tengan su representación legal, a fin de que les faciliten los datos necesarios, y con ellos y los que queden a guisa de otros dados, procederán los Ayuntamientos a la formación de las listas a que se refiere el párrafo tercero del artículo 2.º de la Ley de 30 de Enero de 1932.

Artículo 23. Contra los acuerdos de los Ayuntamientos admitiendo o denegando la inclusión en las listas de que trata el artículo anterior, podrán acudir en alzada ante el Gobernador los dueños de los cementerios privados o su representación legal dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha de la notificación del acuerdo.

Contra la resolución del Gobernador procede el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal provincial.

Artículo 24. Los cementerios particulares o paños de familia independientes que no se hallen declarados en cementerios generales, tendrán el carácter de cementerios privados y estarán sometidos a las disposiciones de la Ley de 30 de Enero de 1932 y a las de este Reglamento.

Artículo 25. Los cementerios construidos por extranjeros en territorio español, destinados al enterramiento de ciudadanos de las respectivas naciones que en vida profesaron religión distinta de la católica, continuaran prestando servicio como hasta hoy, pero en ellos solo podrán enterrarse los cadáveres de quienes hayan tenido la misma nacionalidad y profesado la misma religión que los fundadores del cementerio en que la inhumación haya de practicarse.

Cuando los cementerios a que se refiere el párrafo anterior no puedan ya prestar servicio, serán clausurados y no se permitirá la construcción de otros nuevos que tengan el mismo carácter.

Lo dispuesto en este artículo es aplicable a los cementerios muertos y hebreos que existen en las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla.

CAPÍTULO IV

Del carácter de los enterramientos.

Artículo 26. Para que tenga carácter religioso el enterramiento de los que hubieren fallecido después de cumplir la edad de veinte años y no hallándose incapacitados para testar por causa de demencia, será necesario que así lo hayan dispuesto de una manera expresa, utilizando al efecto cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos siguientes.

Los sacerdotes, ministros y religiosos profesos de los distintos cultos podrán ser enterrados con arreglo a los ritos de sus respectivas religiones si no hubiesen dispuesto lo contrario.

Artículo 27. En cada Juzgado municipal se llevará un Registro especial destinado a contener las manifestaciones de voluntad relativas al carácter de los enterramientos.

Artículo 28. Los libros del Registro especial serán folionarios, tendrán un índice alfabético y se encabezarán con una diligencia de apertura y se terminarán con otra de cierre análoga a las establecidas para los libros del Registro civil.

Artículo 29. Los asientos del Registro especial estarán autorizados con el sello del Juzgado municipal y se firmarán por el Juez y el Secretario, o por quienes legalmente los sustituyan, y por la persona que haga la declaración si supiere firmar; en caso de que no sepa o no pueda firmar, el Juez hará constar esta circunstancia en el asiento.

Artículo 30. Las equivocaciones u omisiones que se hubieren cometido serán salvadas de punto y letra de la misma persona que haya escrito el asiento al cual se éste, y haciéndose al efecto las oportunas llamadas, fecha de esta manera la corrección se procederá a estampar el sello y firmas que correspondan.

Artículo 31. Firmado ya un asiento no se podrá hacer en el rectificación alguna y solo procederá extender un nuevo asiento, a petición del declarante interesado, poniendo nota marginal de rescisión en ambas inscripciones.

Artículo 32. En cada inscripción hecha en el Registro especial se hará constar el lugar y la fecha; el nombre, apellidos, edad y estado del que hace la declaración; la manifestación del carácter que quiere que tenga su enterramiento y los nombres y apellidos del Juez municipal y del Secretario.

Artículo 33. Los que soliciten la inscripción podrán comparecer por sí o hacerse representar por apoderado que lo sea en virtud de poder especial en el que conste con toda claridad la manifestación que se ha de inscribir en el Registro especial.

Artículo 34. Después de verificada la inscripción, el Juez entregará al interesado una papeleta firmada por él y sellada con el sello del Juzgado, en la

que se haga constar únicamente el hecho de la inscripción y la fecha de la misma.

Artículo 35. El hecho de haber obtenido una inscripción en el Registro especial no priva al interesado del derecho a solicitar nuevas inscripciones en el mismo o en otros Juzgados municipales. En el caso de existir varias inscripciones relativas a la misma persona no se tendrá en cuenta, para determinar el carácter del enterramiento, lo dispuesto en la de fecha más reciente.

Artículo 36. El Registro especial será secreto. No se expedirá certificación alguna del contenido de sus asientos si a la solicitud no se acompaña certificado de la partida de defunción de la persona a que el asiento se refiere.

Artículo 37. Las inscripciones en el Registro especial serán gratuitas y las certificaciones se expedirán también sin pago de derecho y en papel de última clase.

Artículo 38. La manifestación expresa relativa al carácter del enterramiento podrá hacerse, también, en cualquiera de las formas siguientes:

Primera. En testamento válido. Cuando el testamento sea nulo por falta de solemnidades legales, podrá, sin embargo, servir como manifestación expresa de la voluntad en cuanto al carácter del enterramiento siempre que por el pueda conocerse de un modo indudable cuál era en este punto la voluntad del testador.

Los testamentos a que se refiere el artículo 194 del Código civil, surtirán los mismos efectos sin necesidad de ser públicos o de ser de escritura pública ni por el notario.

Segunda. En escritura pública.

Tercera. En documento privado, firmando por el que hace la declaración de voluntad y escrito todo el de su puño y letra.

Cuarta. En declaración manuscrita firmada por el declarante y por el Juez municipal o el Alcalde del lugar en que se haga la declaración.

Quinta. En declaración manuscrita firmada por dos testigos mayores de edad y por el declarante.

Los que no puedan o no sepan escribir podrán hacer la manifestación expresa relativa al carácter del enterramiento en declaración manuscrita firmada por el Juez municipal o el Alcalde o tres testigos. No podrán ser testigos firmantes de la declaración los parientes del declarante dentro del tercer grado.

Artículo 39. Los incapacitados para testar por causa de demencia sólo podrán hacer la declaración expresa relativa al carácter de su enterramiento en instrumento otorgado en un intervalo lúcido con los requisitos del artículo 663 del Código civil.

Artículo 40. Cuando al fallecimiento de una persona sólo apareciese una declaración de voluntad relativa al carácter de su enterramiento, tendrá ésta validez, aunque carezca de fecha. Si apareciesen dos o más, prevalecerán las de fecha más reciente sobre las anteriores y las que estén fechadas so-

bre las que no lo estén. En el caso de que haya varias declaraciones contradictorias y ninguna esté fechada, se procederá como si no existiese declaración alguna.

Todas las dudas que puedan surgir respecto a la existencia, validez o interpretación de las manifestaciones de voluntad relativas al carácter del enterramiento serán resueltas por el Juez municipal del lugar en que el fallecimiento hubiere ocurrido en una comparecencia que se celebrará en la forma dispuesta en los artículos siguientes. Podrán solicitar la intervención del Juez municipal y asistir a la reunión que este convoque, no sólo los familiares del difunto, sino también cualquier otra persona que conozca la voluntad del difunto o esté en posesión de datos que permitan conocerla.

Artículo 41. En aquellos casos en que la interpretación de la voluntad correspondiente a los familiares del difunto, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4.º de la Ley de 30 de Enero de 1932, se cumplirá lo que dichos familiares dispongan, siempre que procedan de común acuerdo. Si entre ellos surgieren divergencias acerca de la interpretación de la voluntad del difunto, el Juez municipal del lugar del fallecimiento, a instancia de cualquiera de los parientes, citará a una reunión a todos los familiares residentes en la localidad, y en vista de sus alegaciones resolverá los que estime más acertados respecto al carácter del enterramiento.

Artículo 42. La reunión a que se refiere el artículo anterior podrá celebrarse en el local del Juzgado o en cualquier otro que el Juez estime más conveniente, atendidas las circunstancias del caso.

Artículo 43. Después de haber sido requerido para convocar la reunión a que se refieren los artículos anteriores, citará a los parientes que residan en la localidad, aunque sea de modo accidental. Podrán asistir a la reunión los parientes que no hayan sido citados. El Juez, después de oírlos y teniendo en cuenta sus alegaciones y las pruebas que hayan aportado resolverá sin ulterior recurso y comunicará su resolución inmediatamente a las personas encargadas del enterramiento.

Artículo 44. Cuando el enterramiento tenga carácter religioso, la sepultura podrá contener inscripciones y signos adecuados a dicho carácter y ante ella se podrán celebrar los ritos funerarios del culto respectivo.

Artículo 45. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los panteones de familia construidos dentro de los cementerios serán considerados como una sola sepultura.

El hecho de que un panteón de familia sea considerado como una sola sepultura, no priva a los que por cualquier título tengan derecho a ser enterrados en ellos de la facultad de disponer libremente acerca del carácter de su enterramiento, dentro del recinto de los mismos.

Disposición adicional.

El Ministerio de Justicia organizará el registro especial a que se refieren los artículos 27 a 37 de este Reglamento, dictando al efecto las disposiciones oportunas.

Madrid, 8 de Abril de 1933.—Aprobado por S. E.—El Ministro de Justicia.—Alfonso.

3.- 25 de abril de 1933. "Decisiones del Poder Civil.

Dictamen sobre incautación y expropiación de cementerios católicos."

BOE de Segovia, año 19, 29 de abril de 1933, núm. 8, págs. 196-204.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo:

El Letrado que suscribe tiene el honor de elevar a V. E. el siguiente dictamen:

Publicado en la "Gaceta" del 12 del actual el Reglamento para la aplicación de la Ley de 30 de Enero de 1932, llamada de Secularización de Cementerios, ha venido el señor Ministro de Justicia en el preámbulo de dicho Reglamento, a dar la razón al Letrado informante sobre la competencia de los Tribunales provinciales de lo contencioso-administrativo, para conocer de los recursos sobre incautaciones.

No es el deseo de hacer resaltar un criterio, el que motiva este dictamen, es únicamente el propósito que le anima, el que se dé a conocer a los señores Curas Párrocos aquellos derechos que deben ejercitar para defender los que nacen de ser la Iglesia, por regla general, la propietaria de los cementerios católicos, de los que se han incautado o han de incautarse los Ayuntamientos para convertirlos en cementerios municipales.

Habiendo de tener este informe solo el carácter de un dictamen forense, claro es que la crítica que merece la disposición ministerial ha de quedar reservada a trabajos de índole diferente, en los cuales cabe estudiarla bajo su aspecto político, social y religioso, aunque sin desdeñar el jurídico.

Así, pues, va el firmante a tratar de la aplicación de los preceptos contenidos en el Capítulo II del Reglamento de referencia, el cual capítulo contiene los artículos 6.º al 19.º, ambos inclusive, siendo conveniente para la mayor claridad de la actuación de los señores Curas Párrocos, distinguir dos casos principales, que a su vez podrán ser subdivididos.

Primer caso—Cementerios de los cuales se hayan incautado ya los Ayuntamientos a la publicación del Reglamento.

Hay no pocos Ayuntamientos que nada más publicarse la Ley de secularización de cementerios y sin esperar a la publicación del Reglamento, anunciado en ella, procedieron, para no andar remisos en sus manifestaciones laicistas, a incautarse de los cementerios parroquiales, aun contra la protesta de los señores Curas Párrocos.

En este caso resulta hecha la incautación, y en su consecuencia, deberá procederse por el señor Cura Párroco, a presentar, no bien tenga conocimiento de estas instrucciones, los documentos por los que se pruebe la propiedad de cada cementerio, debiendo sobre este par-

ticular tener muy presente los señores Curas Párrocos que el dominio de los bienes se adquiere por la posesión no interrumpida durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, según nuestro vigente Código Civil (artículo 1957), con buena fe y justo título, y aún sin estas condiciones por treinta años. (Art. 1959)

Hago esta cita del Código Civil de la manera de adquirir el dominio, porque en no pocas parroquias ocurrirá se carezca de título de dominio del cementerio, pero en cambio existirán los libros de enterramiento, los de fábrica en que consten las obras hechas por la Iglesia, el reconocimiento por las Corporaciones municipales de ser la propiedad de los mismos de la Parroquia, etcétera,; y el testimonio de toda esa documentación es el que ha de presentarse al Ayuntamiento junto con la instancia solicitando el pago de la cantidad en que se estime el valor del cementerio, el cual valor se ha de deducir por lo que represente la superficie del cementerio, los edificios que le sean anejos, y por la utilidad y rendimiento que pueda reportar por derechos de enterramientos, alquiler y rentas de sepulturas, todos cuyos conceptos han de capitalizarse para hallar el valor, cuyo es el importe que ha de abonar el Ayuntamiento por la expropiación.

Así, supóngase, que la superficie son dos obradas de terreno, que deberán ser calculadas a doscientas cincuenta pesetas cada una, y que representarían, por consiguiente, quinientas pesetas; calculando que exista un edificio destinado a depósito de cadáveres, etc., al cual se le dé el valor de quinientas pesetas, y agregando a estos dos conceptos el de doscientas cincuenta pesetas anuales por derechos de enterramientos y alquiler y renta de sepulturas, que capitalizado al cinco por ciento, que es la capitalización obligada para que produzca el interés legal, resultará que el valor total del cementerio que debe ser reclamado al Ayuntamiento por el señor Cura Párroco es el de *seis mil pesetas*, que es la suma que arrojan todos los conceptos anteriores.

Mencionados quedan los documentos que deben acompañarse a la solicitud, pero no ha de olvidarse que hay muchos casos en que los Ayuntamientos al proceder a la incautación, han expresado en el acuerdo de la sesión correspondiente ser el cementerio parroquial, y así lo han transcrito en sus oficios a las señores Curas Párrocos, dándose también el caso de reconocer la propiedad de la Iglesia en el acta de incautación; y estos documentos deben ser también acompañados con la instancia solicitando el pago del valor del Cementerio.

Preciso es no olvidar que hay cementerios que son propiedad de una Congregación o Cofradía, y entonces la instancia debe ir firmada no sólo por el señor Cura Párroco, que tiene un interés directo en la defensa de

las propiedades de las Cofradías o Congregaciones, porque al fin éstas forman parte de la Iglesia, sino por el Presidente o Alcalde (como se le denomina en muchos pueblos de la provincia) de la dicha Cofradía o Congregación.

En este caso, además de la certificación del libro de actas y de los títulos de propiedad del cementerio, habrá de acompañarse certificación del acta de nombramiento del Presidente, y cuantos otros documentos puedan hacer referencia a aquella propiedad; debiendo hacer la capitalización del cementerio en la forma antes indicada.

Supongamos que el Ayuntamiento, a pesar de todos los documentos y probanzas ofrecidas y practicadas, se negase a reconocer a favor de la Iglesia, Cofradía o Congregación, la propiedad del cementerio, y entonces, conforme a lo dispuesto en el último inciso del art. 10 del Reglamento a que vengo haciendo referencia, preciso será acudir al Juzgado de 1.ª Instancia demandando al Ayuntamiento en el juicio ordinario correspondiente, para que reconozca ser propiedad de la Iglesia el cementerio; habiéndose de ejercitar la acción al amparo del beneficio de pobreza que reconoce nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil.

El ejercicio de esta acción no será iniciada por los señores Curas Párrocos sino después de que haya sido estudiado cada asunto particular por la Asesoría jurídica de la Diócesis, y el Excmo. Sr. Obispo haya autorizado la promoción del litigio, ya que así ha de hacerse de acuerdo con las disposiciones canónicas y además conforme a medidas de elemental prudencia.

Puede acontecer que el Ayuntamiento bien porque al proceder a la incautación reconociera a la Iglesia como propietaria del cementerio, o bien porque el reconocimiento le haga a la vista de los documentos que se presenten por el señor Cura Párroco, y que señalados quedan anteriormente, acuerde proceder a la expropiación, y si así sucede puede ocurrir:

A) Que, cumpliendo con lo dispuesto en el párrafo primero, el Ayuntamiento por mediación del Alcalde dirija una hoja apreciatoria que no es sino una proposición de convenio, en la que hará constar la cantidad que está dispuesto a abonar por todos los conceptos y libre de

toda clase de gastos; y si fuese aceptada entonces se procederá al pago haciéndose la entrega por el Alcalde de la cantidad fijada por ante Notario.

Es de notar que el precepto no dice el plazo dentro del cual ha de contestar el propietario del cementerio, en el caso que nos interesa el representante de la Iglesia, a la proposición del Ayuntamiento, y esta falta de señalamiento de plazo permite que los señores Curas Párrocos den conocimiento al Excmo. Sr. Obispo del ofrecimiento, informándole a su vez de todos los detalles y antecedentes precisos para que el Prelado pueda formar juicio exacto y resolver lo que más procedente sea.

Para resolver sobre la aceptación o no aceptación, además de los factores que para capitalizar el valor de los cementerios quedan expuestos anteriormente, debe también tenerse en cuenta que, por no ordenarse con claridad si el pago del impuesto de Derechos reales ha de ser o no de cuenta del propietario del cementerio, será conveniente agregar su importe al precio que se señale.

Será procedente aceptar el precio que ofrezca el Ayuntamiento no sólo si es el debido, sino también si la diferencia entre el precio y la apreciación es de escasa importancia, porque deben evitarse los litigios, que aun tramitados en concepto de pobre producen gastos y no están exentos de molestia.

B) Si del examen de todos los antecedentes y elementos de juicio de que se disponga, se resolviera no aceptar el ofrecimiento hecho por el Ayuntamiento, entonces, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 21 del Reglamento, objeto de estudio, el señor Cura Párroco presentará una hoja de tasación, en la que se hará constar la apreciación que se crea justa, la cual hoja habrá de ser entregada al Ayuntamiento para que éste resuelva.

No dice el precepto los datos o requisitos que ha de contener la hoja, pero como se trata de una apreciación de valor, que puede ser aceptado o no por el Ayuntamiento, es conveniente que la hoja a que el precepto se refiere vaya redactada en forma de instancia, encabezada por el señor Cura Párroco como representante del pueblo de la Iglesia, y en la que se diga que a los efec-

tos del artículo 12 del Reglamento para la aplicación de la Ley de secularización de cementerios, el que ha sido objeto de incautación se hace constar.

Primero: Número de áreas, centiáreas, etc.

Segundo: Si tiene paredes que le circunden, los metros de pared y clase de ésta.

Tercero: Los edificios enclavados en el cementerio, medida de los mismos, así como su clase de construcción.

Cuarto: Número de enterramientos y sus clases, así como la renta que produzcan, e igualmente lo que se cobre por derechos de enterramiento.

Quinto: Número de enterramientos vacantes y cantidad que se cobre por la renta de cada uno.

Sexto: Como consecuencia de todos los datos señalados en los números anteriores, el valor que resulte de la capitalización al cinco por ciento.

Se concluirá suplicando al Ayuntamiento acuerde abonar por la expropiación del cementerio, la cantidad mencionada en el último apartado.

C) Nada habrá que hacer ni nada que comentar si el Ayuntamiento acepta la valoración que dé el señor Cura Párroco, pues que entonces con la entrega del precio por ante Notario, el que redactará la escritura correspondiente que firmará el señor Cura Párroco con la representación del Ayuntamiento, acreditada con la correspondiente certificación del acuerdo municipal en el que consten no sólo la autorización para el otorgamiento de la escritura al representante designado, sino también la aceptación del precio, el asunto quedará terminado, si bien no debe el señor Cura Párroco suscribir el acta ni redactar ninguna instancia ni documento sin hacer constar que se hace para obedecer los mandatos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, pero sin perjuicio de que en su día la Iglesia pudiera ejercitar sus derechos, que fueran reconocidos, contrarios a la secularización, incautación y expropiación de los cementerios católicos.

Conviene tratar del procedimiento a seguir en el caso de que el Ayuntamiento no acepte la valoración que haga el señor Cura Párroco.

Son dos los modos que tiene la Corporación municipal de manifestar su falta de conformidad con dicha valoración. Es el uno expreso, que aparece consignado en

el artículo 14 del Reglamento, que está siendo objeto de comentario. Es el otro tácito, al que se refiere el artículo 14 del mentado Reglamento.

a) *Modo expreso.*—Recibida la hoja de valoración, y no estando conforme con ella la Corporación municipal, invitará al señor Cura Párroco a que designe de acuerdo con el Ayuntamiento el perito que haga la tasación.

No dice qué clase de perito ha de ser, pero estimamos que de no poder ser un Arquitecto, o un Aparejador de obras, debe ser designado un Maestro de obras de reconocida competencia y rectitud, y como estos peritos no es lo general que existan en todos los pueblos, y como por otra parte el Reglamento no exige sean vecinos del pueblo donde la peritación haya de practicarse, no cabe dudar puede designarse a persona de vecindad distinta.

Si el Ayuntamiento no se aviniera a que fuera nombrada persona que ostente alguno de aquellos títulos, y por el orden de mayor a menor en que aparecen designados, entonces el señor Cura Párroco no se avendrá a la designación y acudirá al señor Juez de 1.ª Instancia del distrito, con instancia razonada, dando cuenta de la discrepancia y de los motivos de ella, pidiendo que haga el nombramiento en favor de persona que reúna alguno de dichos títulos, con la preferencia indicada.

Expresado queda que la instancia ha de ser razonada, y ello es debido a que el Reglamento guarda silencio en la forma en que debe hacerse la petición al Juez, para la designación del perito, y es elemental que, aparte de que es principio de Derecho que lo que no está prohibido se entiende permitido, toda petición que se dirija a cualquiera Autoridad o Corporación debe ser razonada, porque las Autoridades y Corporaciones no pueden ni deben admitir solicitudes que no obedezcan a principios de razón y que sean únicamente producidas por el capricho.

A virtud de esta instancia, el Juzgado habrá de hacer la designación del perito, al cual se le entregará por el Juez tanto las hojas de estimación que hayan presentado el señor Cura Párroco y Ayuntamiento, como aquellos otros elementos de juicio que puedan servir al perito para verificar el avalúo.

Dicho queda anteriormente las alegaciones que de

ben hacerse para fijar el precio, y conviene añadir ahora que los señores Curas Párrocos deben proveerse de certificaciones del Servicio Catastral o de los mismos Ayuntamientos, si aquél no se hubiera llevado a efecto en el término municipal, en que conste el líquido imponible, que parezca asignado al Cementerio.

Si ninguna de estas dos certificaciones pudieran lograrse, en razón a que en la legislación anterior los cementerios no estaban sujetos a tributación alguna, los señores Curas Párrocos solicitarán del Servicio Agrónomico de la provincia una certificación en la que se haga constar el precio que aparece asignado en el término municipal respectivo a la hectárea de terreno.

Estas certificaciones han de ser de una gran utilidad, no ya sólo para que el perito pueda cumplir con mayor acierto su cometido, sino también para en el caso de que el señor Cura Párroco tenga que acudir ante el Tribunal provincial contencioso administrativo, conforme a la facultad que concede el artículo 19 del Reglamento que motiva este dictamen.

b) *Modo de dicto*.—El artículo 14 del Reglamento mencionado autoriza al Ayuntamiento a no manifestar la aceptación de precio que haga el señor Cura Párroco, y en este caso, transcurridos quince días desde la fecha en que se hiciera la proposición, el señor Cura Párroco acudirá al Juzgado de 1.ª Instancia, pidiendo el nombramiento de perito.

A partir de este nombramiento, la tramitación que se ha de seguir es común a los dos casos y por ello ha de tratarse conjuntamente en el siguiente apartado.

c) *Procedimiento a seguir en ambos casos*.—De mos por sentado que el perito ha aceptado el cargo (pues puede no aceptarlo y entonces el Juzgado ha de hacer nueva designación) y ha procedido a la tasación del cementerio; entonces el Juzgado ha de entregar copia del avalúo a cada una de las partes, esto es al señor Cura Párroco y al Ayuntamiento, y si ambos están conformes con el precio señalado, han de manifestarlo así por escrito dirigido al Juzgado en el término de ocho días, contados desde el siguiente a aquel en que se le haya hecho entrega de la tasación pericial.

La conformidad o disconformidad no habrán de expresarla los señores Curas Párrocos sin consultar pre

viamente al Excmo. y Rvdmo. Señor Obispo, lo que harán acompañando no sólo la tasación pericial sino aquellas otras elementos de juicio a que se ha aludido anteriormente, y un informe en el cual el señor Cura Párroco expondrá al Prelado su opinión.

No ha de olvidarse que si se dejasen transcurrir los ocho días desde la entrega de la copia de la tasación pericial, se presume ésta aceptada.

Si por ambas partes ha sido aceptada la tasación, el expediente terminará mediante la entrega del precio, en la forma antes indicada.

Pero supongamos que no ha existido el acuerdo; y en este caso el Juzgado de 1.ª Instancia remitirá el expediente al Gobernador Civil, el cual dentro del término de treinta días, oyendo a la Diputación provincial o a la Corporación que la sustituya, determinará la cantidad que ha de abonarse.

Nada dice el artículo 18 del Reglamento que se viene citando, de si el Juzgado ha de hacer saber o no a las partes la remisión del expediente al Gobernador Civil, pero en buenos términos procesales debe hacerlo, para que los interesados puedan usar de su derecho haciendo ante aquella Autoridad las alegaciones que crean convenientes y que han de tener por fin principal rebatir los argumentos o motivos en que tanto el perito como la otra parte se hayan basado para la fijación del precio.

Esto no ha de olvidarse, pues el Gobernador Civil ha de fijarle dentro del máximo y del mínimo que hayan señalado los interesados y el perito designado.

d) *Recurso contra la resolución gubernativa*.—Puede acontecer que el expediente tenga vicio sustancial en la tramitación, por haberse infringido los señalados en el procedimiento que el Reglamento determina, y de ocurrir esto deberá promoverse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial.

Este mismo recurso ha de utilizarse contra la resolución gubernativa por lesión en la apreciación, siempre que represente tal lesión la sexta parte del precio justo.

¿Quién ha de estimar esta lesión? Indudablemente que el Tribunal provincial Contencioso administrativo, mediante los elementos que del expediente resulten, pues que no debe olvidarse que el recurso contencioso admi-

nistrativo no es más que una revisión de lo actuado por la administración, por lo que no puede pretenderse prueba distinta de aquella que vaya a robustecer la ya practicada en el expediente o aquella que en el expediente no se haya practicado por culpa de la Administración.

Indudable es que el interesado ha de ser quien precisamente estime se le ha lesionado a lo menos en esa sexta parte, para poder presentar así el problema al Tribunal mediante las alegaciones que sean oportunas.

Como el Reglamento de que se viene tratando nada dice del plazo dentro del cual ha de interponerse el recurso contencioso administrativo, no cabe dudar ha de serlo dentro de los tres meses siguientes a la notificación de la resolución del Gobernador, pues que tal es el precepto del artículo 7 de la Ley de 22 de Junio de 1894, que es la que rige aquella jurisdicción.

Segundo caso.—Cementerios de los cuales no se ha ya incautado los Ayuntamientos a la publicación del Reglamento. Por el artículo sexto del Reglamento, que ratifica el de la Ley, los Municipios que no tengan cementerio propio podrán incautarse de los católicos que tengan carácter general, y para ello deberán acordar las Corporaciones municipales en sesión aquella incautación, debiendo señalar día y hora en que han de verificarlo, citando al señor Cura Párroco como representante de la Iglesia propietaria, o al Presidente de la Cofradía, si el cementerio perteneciese a alguna de éstas, para que concurren al acto de la incautación.

Como le ésta ha de levantarse acta deberán firmarla el señor Cura Párroco y demás personas que concurren, y el señor Cura hará entrega del cementerio haciendo se consigne el número de enterramientos, diferenciando sus clases y se inventarie cuanto en el cementerio y sus dependencias exista, así como los libros de enterramientos que entregue; y no debe consentir se cierre el acta sin consignar que hace la entrega por obediencia a la ley y a la autoridad, pero no sin hacer constar su más respetuosa y más enérgica protesta ya que el cementerio, por ser cosa bendita y santa, no puede entrar en el comercio de los hombres, reservándose los derechos que en su día la legislación pudiera reconocer nuevamente a la Iglesia sobre los camposantos.

Cuidará el señor Cura Párroco de obtener copia au

torizada del acta, y en ésta habrá de poner especial cuidado conste que el Ayuntamiento ha citado a dicho Señor como representante de la Iglesia o de la Parroquia, a la cual la Corporación municipal ha considerado propietaria del cementerio.

Llevada a efecto la incautación el señor Cura Párroco habrá de dirigirse al Ayuntamiento en la forma que indicada queda en el *Primer caso*, siguiendo después la conducta que bajo aquel epígrafe queda manifestada.

Tal es mi opinión que me complace en elevar a V. E.
Segovia 25 de Abril de 1933.

Ld.º Gabriel J. de Cáceres

4. - 19 de abril de 1933. Circular del Provisorato. "Sobre cementerios parroquiales. Instrucciones relativas al Reglamento publicado en la Gaceta de 12 de Abril."

BDE de Oviedo, año 63, 15 de abril-15 de mayo de 1933, num. 3, págs. 41-43.

La aplicación por los municipios del Reglamento aprobado el día 8 y publicado en la Gaceta de 12 del corriente para poner en práctica la ley de 30 de Enero de 1932 (publicada en la Gaceta de 6 de Febrero del mismo año), que regula la secularización de cementerios, pudiera originar a los Rdos. Sres. Párrocos algunas dificultades en el cumplimiento de su deber. Con el fin, pues, de evitarlas o atenuarlas en lo posible, les damos a continuación algunas instrucciones que puedan servirles de norma en la materia, y que se referirán solamente a los tres puntos más importantes que afectan a los cementerios parroquiales: Incautación, expropiación y tesación.

I. *Incautación.* 1.º Cuando los señores párrocos reciban del municipio alguna notificación relativa a la incautación del cementerio parroquial, la contestarán diciendo que ellos no son, a los efectos del comunicado, los «dueños ni representantes legales» a quienes según el Reglamento que comentamos, debe dirigirse la notificación.

2.º Si el municipio se dirigiese directamente al párroco exigiéndole la entrega de las llaves en forma que no pueda esta evitarse sin violencia, hará constar en el acto la protesta razonada de que considera la incautación como una infracción del Reglamento en que se ampara y como lesiva de los derechos de la Iglesia. De ello dará cuenta inmediatamente al Provisorato.

3.º Si el municipio se incautará del cementerio prescindiendo en absoluto del párroco, apenas este tenga conocimiento del hecho, lo comunicará al Provisorato con todos los elementos de juicio que considere necesarios.

II. *Expropiación.* 4.º El hecho de la incautación, no prejuzga nada en contra del derecho de propiedad de la Iglesia sobre los cementerios incautados, y, conforme a lo dispuesto en el art. 10 y siguientes del Reglamento, los municipios que se incauten de tales cementerios deben abonar la indemnización correspondiente. Al efecto, y al tenor de lo dispuesto en el n.º II de la Circular de este Provisorato de 15 de Marzo de 1932, deben los párrocos reunir

con la mayor diligencia los títulos jurídicos que acreditan el derecho de propiedad a favor de la Iglesia, y presentar lo antes posible en el Ayuntamiento que se hubiese incautado copia fehaciente de los mismos, exigiendo el oportuno recibo. Los títulos originales procurarán guardarlos cuidadosamente para posibles diligencias ulteriores. Asimismo darán copias, si les fueren pedidas, de los datos contenidos en los libros parroquiales relativos al cementerio, guardando dichos libros con toda diligencia.

5.º Si el Municipio acordase desestimar el derecho de propiedad de la Iglesia sobre algún cementerio parroquial, lo pondrán los párrocos en conocimiento de este Provisorato, acompañando una relación detallada de los títulos jurídicos enviados al municipio, más un estado de las cuentas del Cementerio que comprenda los gastos e ingresos que haya tenido por cualquier concepto durante el último quinquenio y cuantos datos estimen oportunos para ilustrar el asunto.

III. Tasación. 6.º Como la indemnización de los cementerios incautados ha de hacerse a base de una tasación previa de los mismos, apenas reciban la presente circular, los Sres. Párrocos, de acuerdo con los Sres. Arciprestes, procederán a designar persona perita que haga la tasación de los respectivos cementerios parroquiales. Dicha tasación además de la firma del perito, llevará también el Visto Bueno del Sr. Arcipreste y del Párroco.

7.º Si la tasación ofrecida por el Municipio, al tenor del art. 11 del Reglamento, coincidiera o no fuese notablemente inferior a la indicada en el número precedente, los Sres. Arcipreste y Párroco podrán aceptarla; en caso contrario presentarán al municipio, copia de la hecha por el perito designado por ellos. Art. 12.

8.º Si el municipio dentro de quince días no la aceptase quedan facultados para designar, de común acuerdo con él, al perito tercero de que habla el art. 13. Y si no fuera posible llegar al acuerdo, pedirán al Juez de Primera Instancia que lo designe, según dispone el artículo mencionado.

9.º En el supuesto de que la tasación del perito judicial no fuese satisfactoria, a juicio del Arcipreste y Párroco, lo manifestarán así dentro del octavo día al Sr. Juez y darán cuenta de ello al Provisorato enviando juntamente los datos o informes necesarios para poder formar juicio sobre el particular, y continuar las actuaciones pertinentes.

10.º Cuando surgiera alguna disparidad de criterio entre el Sr. Arcipreste y el Párroco, en los trámites de este n.º III, que van todos asignados a los dos conjuntamente, lo mismo que cuando dudasen los dos de la conveniencia de aceptar o no la tasación ofrecida por el municipio o por

el perito judicial, lo pondrán, a la brevedad posible en conocimiento del Previsorato con los antecedentes necesarios para el esclarecimiento del asunto.

11.º Donde esté en vigor el concepto civil de parroquias y para salvar los derechos particulares que se hubieran podido adquirir en los cementerios incautados al amparo de la legislación anterior sobre cementerios, los señores párrocos publicarán esta circular, a los efectos de declarar libre a la Iglesia de toda responsabilidad ulterior.

Oviedo 19 de Abril de 1931.
El Provisor y Vicario General del Obispado
Dr. Juan Puertes.

5.- Circular:

BOE de Morderado, año 76, 20 de mayo de 1933, núm. 10, págs. 81-85.

13. Se tendrán por no puestos, y sin valor en orden a la incautación de que se trata en el citado Reglamento, los actos realizados antes de la promulgación y vigencia del mismo en los cementerios parroquiales.

2a. Procuren los Párrocos, sin mezclar las cosas religiosas con materias de contiendas humanas, y sin animosidades ni altiveces, antes bien con espíritu de cristiana caridad, que los fieles conozcan las penas establecidas en los cánones 2334 y 2346 contra los que dictan leyes, mandatos o decretos contrarios a la libertad y los derechos de la Iglesia, y contra los que usurpan los bienes eclesiásticos.

3a. Igualmente han de procurar, cuando el Ayuntamiento trate de acordar la incautación del cementerio parroquial, que los concejales católicos y los que, sin profesarse tales, suelen respetar los derechos de la Iglesia, sepan que está en su mano realizar o no la incautación, puesto que la ley civil les faculta a ello, pero no les obliga, y que por lo tanto no pueden ampararse de coacción ni siquiera de prescripción legal alguna que les libre de incurrir en las penas eclesiásticas, si perpetran la incautación o cooperan eficazmente a ella.

4a. En previsión de posibles incautaciones, cuiden los Párrocos de tener a mano sus nombramientos por si les fuesen exigidos para acreditar su personalidad, y reúnan la documentación necesaria para probar el dominio, a saber: títulos de propiedad, datos de administración y conservación del cementerio tomados de los libros de la fábrica parroquial (obras hechas, derechos de sepulturas percibidos y desde cuando, cesiones y reconocimientos de la propiedad por Autoridades y particulares, acuerdos, actas y oficios reconociendo la propiedad etc.), y tengan presentes en caso necesario los arts. 1957 y 1959 del Código Civil, que dicen: Art.1957 "El dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes, y veinte entre ausentes, con buena fe y justo

título". Art. 1959 "Se prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes".

5ª. Fijense los Curas en si la propiedad y administración de la Iglesia sobre el cementerio ha sido sin interrupción; si es pública y notoria, si el Ayuntamiento ha contribuido a edificar, conservar, ampliar, o reparar el cementerio, en qué cuantía y en qué condiciones; si ha percibido derechos del mismo, o lo ha administrado temporalmente, y si parcial o totalmente se ha reintegrado de la suma con que hubiere contribuido a las obras.

6ª. Para la tasación han de tener en cuenta: la extensión y el valor del solar, paredes que lo circundan y su estado de conservación; edificios que existan en el recinto, y extensión, construcción y estado de conservación de los mismos; y cálculo aproximado de ingresos por todos conceptos. Para el mayor acierto asesorende de persona perita.

7ª. No olviden los Párrocos y Encargados de parroquias que, a falta de otras pruebas, y aún a falta de éstas, la presunción está en favor de la propiedad de la Iglesia, porque ella ha sido siempre llamada en primer término por la ley civil española a la construcción de los cementerios. Así las RR.OO. de 8 agosto 1830 y de 20 febrero 1831 disponían que las obras de construcción de los cementerios se costeasen de fondos de fábrica de las Iglesias; y la R.O. de 2 junio 1833 decía lo mismo: "Respecto a los pueblos donde no los haya (cementerios) los mismos Intendentes, obrando de acuerdo con los Prelados eclesiásticos, cultivarán de que se dé principio desde luego a su construcción a costa de los fondos de las fábricas de las Iglesias, que son los primeros obligados a ello". Lo mismo se ordenaba en otra R.O. de 13 febrero 1834. Y muy posteriormente en 28 diciembre 1888 se dió una Circular por la Dirección General de Beneficiencia y Sanidad disponiendo que, cuando los Párrocos soliciten la construcción de cementerios, digan si podrá atenderse a los gastos de las obras proyectadas con los fondos de las fábricas de las Iglesias. En conformidad con esta legislación, las RR.OO. de 19 abril 1862, 17 junio 1863, 28 abril de 1866, y 10 septiembre 1884 disponían que la administración de los cementerios construidos con fondos de fábrica correspondiese a la Iglesia, que la ejercería por medio de sus Párrocos, no dando a

los Alcaldes otra intervención sino la que se refiere a higiene y policía sanitaria.

6ª Adviertan que aun tienen las parroquias otro título de propiedad a su favor, que es la posesión centenaria, que en muchos casos es inmemorial, la cual nos lleva a la prescripción, uno de los títulos de propiedad admitido y reconocido por las leyes civiles. Véase el art. 1959 del Código Civil, transcrito en la norma 4ª.

9ª Es obligación del Ayuntamiento notificar al Cura el acuerdo de incautación y el día y hora fijados para la misma, verificándose la notificación por copia literal del acuerdo. El Cura manifestará haberla recibido, poniendo en el oficio que se le envíe: "Enterado", sin añadir "y conforme".

10ª Asistan al acto a que se les hubiere citado, y vayan acompañados de dos testigos suyos que han de firmar el acta de todo lo que ocurra. Cuando les sea notificada la incautación, hagan constar en el acta que niegan su consentimiento, que protestan respetuosa y enérgicamente de lo que se hace, y que reservan a la Iglesia los derechos que tiene sobre el cementerio y los que en su día pudiera reconocerle la ley civil. Hecho esto, se retirarán sin prestar su cooperación a acto alguno pertinente a la incautación. Y si se les obliga a entregar las llaves, hagan cosignar en el acta que tal entrega, y cualquier otro acto puesto para cumplir la ley, no significan conformidad o consentimiento por su parte. Pidan finalmente una copia autorizada del acta que se levante, y remítanla a la Curia Eclesiástica.

11ª Consumada ya la incautación han de defender los derechos de la Iglesia en la forma que permiten los artículos 10 y siguientes del Reglamento.

12ª Si el Ayuntamiento, a pesar de las pruebas aportadas, resolviese no reconocer a la parroquia como dueña del cementerio, el Párroco acudirá a los Tribunales civiles, en conformidad con el art. 10 del Reglamento, presentando ante ellos todos los títulos, documentos y pruebas que tenga y esperará su resolución.

13ª Cuando proceda el recurso al Juzgado según el artículo 10, o el contencioso-administrativo contra la resolución del Gobernador, de que habla el art. 19, los Párrocos Nos consultarán previamente el caso exponiéndonos sus razones y

fundamentos, y no incoarán el litigio sin nuestra autorización.

14^o Siempre que hayan de litigar ante los Tribunales invocarán el beneficio de pobreza, a tenor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

15^o Siendo el recurso contencioso-administrativo solamente una revisión de lo actuado, se pondrá especial interés en presentar a su tiempo todos los documentos de propiedad y justiprecio, pues no admite nuevas pruebas sobre las alegadas. Téngase también presente que el recurso deber ser razonado, y que es procedente, cuando la apreciación del Municipio es inferior en una sexta parte al precio fijado por la Iglesia. El plazo para interponer este recurso es de tres meses a contar desde la fecha de notificación hecha por el Gobernador Civil según la Ley de 22 de junio de 1894.

6.- S. r. "Sección civil. Enterramiento de Religiosas."

Sub de Tarazona y Lucena, año 11, 31 de mayo de 1933, num. 151, págs. 331-342.

Publicamos a continuación el oficio, de fecha reciente, del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia de Zaragoza, en contestación a la consulta elevada por el señor Alcalde de la ciudad de Tarazona en virtud de acuerdo, del Excelentísimo Ayuntamiento, sobre aplicación de la ley de 30 de enero de 1932 a los cementerios privados de los tres Conventos de Religiosas de clausura sitos en dicha ciudad tarazonense.

Dice así:

El Ilmo. Sr. Abogado del Estado, Asesor de este Gobierno civil, a quien remiti su oficio de 3 del actual, para su informe, me envió de la forma siguiente:

Excmo. Sr. — Vista su comunicación fecha 5 de los corrientes a la que me acompaña consulta del Alcalde de Tarazona sobre si debe aplicarse a los Cementerios privados de los conventos de Religiosas en clausura lo dispuesto en el artículo 3.º de la ley de 30 de enero de 1932, o bien debe incluirse en el régimen general del artículo 2.º de la ley citada. — Vistos los referidos preceptos y el Reglamento de 8 de abril de 1933. — Considerando que el artículo 3.º de la ley de 30 de enero de 1932 se limita a prohibir para lo sucesivo las inhumaciones en los templos y en sus criptas, así como en las casas religiosas o en los locales anexos a unos u otros. — Considerando que el precepto transitorio no cabe duda, a juicio de esta Asesoría jurídica, que se refiere a aquellos lugares que no sean por sí cementerios privados, porque, si tuvieran esta condición, habrá de aplicarse la disposición clarísima del artículo 2.º de la misma ley que especifica la actuación de los Ayuntamientos con respecto a dichos cementerios; senlado lo cual, es evidente que si los anejos a las casas religiosas de que trata el oficio de la Alcaldía de Tarazona son cementerios particulares, deben regirse por el artículo 2.º de la ley de 30 de enero de 1932 y no por otros preceptos que manifiestamente se refieren a supuestos distintos. — El Abogado del Estado Asesor del Gobierno entiende debe contestarse al Ayuntamiento de Tarazona que es aplicable a los cementerios privados de los conventos de religiosas de dicha ciudad el artículo 2.º de la ley de 30 de enero de 1932. — Y estando conforme con lo anteriormente expuesto por el Abogado del Estado Asesor de este Gobierno Civil, lo comunico a V. para su conocimiento

y efectos, y como contestación a su citado oficio de 3 del actual, consultando lo que antecede. — Zaragoza, 18 de mayo de 1933.
— El Gobernador civil. — Firmado.

De esta comunicación se dió cuenta al Excmo. Ayuntamiento en su sesión del viernes último, 26 del corriente mayo, según aparece en la reseña que publica «El Norte», semanario de la localidad, en su número del día siguiente, 27 del mismo mes, expresando el asunto en los siguientes términos: «Orden del día. El Sr. Gobernador, evacuando la consulta hecha por este Ayuntamiento sobre si las Religiosas de clausura de esta ciudad tienen derecho a enterramiento en sus cementerios privados, traslada el informe del Abogado del Estado, al que da su conformidad, y en el que, después de los fundamentos legales pertinentes, se dice: «El Abogado del Estado, Asesor del Gobierno, entiende debe contestar al Ayuntamiento de Tarazona que es aplicable a los cementerios privados de los Conventos de Religiosas de dicha ciudad el artículo 2.º de la ley de 30 de enero de 1932.» Es decir, se reconoce ese derecho indiscutible a las Religiosas, y el Ayuntamiento, por lo tanto, acuerda obrar en consecuencia».

Queda, pues, reconocido formal y solemnemente por Ayuntamiento y Gobernador, previo informe favorable de la Asesoría Jurídica, el derecho indiscutible que asiste a las Comunidades de Religiosas de los tres Conventos de esta ciudad de Tarazona para utilizar el Cementerio privado que venían poseyendo en favor de las personas que disfrutaban de ese derecho al tiempo de la promulgación de la ley, en la forma y con los requisitos señalados en el artículo 2.º de la misma.

Nos place notar que el Ilmo. Sr. Abogado del Estado-Asesor del Gobierno Civil de Zaragoza emite su informe en vista no solo de la ley, sino del Reglamento de 8 de abril último, con notoria oportunidad, porque de este último Reglamento aun aparece con mayor evidencia, como luego observaremos, y se confirma y robustece el criterio ajustado a la ley en estimación de procedencia de aplicar el artículo 2.º de la misma a los Cementerios privados que venían poseyendo las Religiosas. Admirablemente en su luminoso y preciso informe, con el dominio que le da su competencia y con la visión clara del jurista versado en la elucidación e interpretación de disposiciones legales, distingue sabiamente, alejando toda contrabición en la ley, y advierte que el artículo 3.º se limita a prohibiciones *para lo sucesivo* y no se refiere a cementerios privados existentes, para los que es de aplicar la *disposición transitoria* del artículo 2.º; por lo que, apreciando este carácter

en los de las Religiosas de que se trata, deduce lógicamente la procedencia de aplicarse el referido artículo para regular su uso adaptado a las prescripciones legales.

Para mayor conocimiento del caso, creemos conveniente hacer una pequeña historia o sucinta relación del asunto.

Publicada la ley de secularización de cementerios, se inserta íntegra en este *Boletín*, y el Rvmo. Prelado, en 30 de marzo de 1923, publicó una Instrucción Pastoral sobre la misma en relación con la doctrina, con los derechos de la Iglesia, y dando normas prácticas a vista de la nueva ley para salvar y hacer respetar en cuanto fuera posible y lo consiguieran sus disposiciones los derechos de la Iglesia, los de entidades eclesiásticas o fieles en general. Sobre este punto, advertía que estimaba de aplicación el artículo 2.º para los cementerios de Comunidades Religiosas por lo que atañe a los derechos adquiridos, aconsejando se interesara de la Autoridad Municipal el reconocimiento de tales derechos, no dudando de favorable reconocimiento, por lo menos, en los que reúnan ostensiblemente todas las condiciones para tal calificación y carácter con las derivaciones consiguientes al amparo del mencionado artículo.

Atendiendo a estas indicaciones, las Comunidades de esta ciudad se dispusieron a vindicar los derechos que les correspondían. Particularmente había una M. Priora, muy virtuosa e instruida, dotada de facultades especiales y admirables, la que se sentía amenazada de próxima muerte por varias graves afecciones que la aquejaban, devorándole intensa amargura al solo pensamiento de que pudiera ser sacado su cadáver de aquella su clausura, cuando su consoladora idea y voluntad decidida habían sido la de entregarse irrevocablemente a la Comunidad de tal manera que aun su cadáver y restos continuaran siendo lazo de especial comunicación espiritual para continuas oraciones, y al mismo tiempo testimonio constante de la oblación perpetua hecha a su Dios para siempre en aquella santa casa.

Hubo necesidad de activar diligencias, poniéndose la Autoridad Eclesiástica en comunicación con el Sr. Alcalde, quien, por su parte, manifestó disposición favorable, si el Asesor jurídico dictaminaba la procedencia con arreglo a la ley y el Ayuntamiento así lo acordara. El Sr. Asesor jurídico manifestó que entendía ser clara la comprensión del caso dentro del artículo 2.º, por las razones hoy apuntadas por el Asesor Jurídico del Gobierno de la Provincia, como son tratarse de *derechos adquiridos y de cementerios privados* que esta ley respeta, necesidad de concordar todas las disposiciones y evitar correcciones odiosas, aplicación ostensible de los principios y normas de exégesis legal, paridad de otros casos con identidad de motivos, y otras razones concluyentes.

Elevada instancia con documentos pertinentes de que luego hablaremos, el Ayuntamiento acordó por gran mayoría, con solamente el voto en contra de algún concejal, la admisión de instancia a los efectos pertinentes, a no ser que otra cosa dispusiera la Superioridad en cuyo conocimiento se pondría el asunto. No hubo oposición ninguna superior y se llevó a efecto lo acordado en este y en los otros dos conventos que poseían cementerios en condiciones para lo que se pretendía. Posteriormente, a petición de un concejal, se ha elevado expresa consulta, que ha tenido por resultado la decisión apuntada al principio de este escrito.

A la verdad, bien examinado el asunto, parece clara la resolución favorable para las Comunidades en posesión de Cementerio privado al tiempo de la promulgación de la ley, como dice el Sr. Asesor y por las razones que indica y que parecen incontrovertibles.

a. El artículo 3.º de la ley de 30 enero 1932 se entiende para lo sucesivo y por lo tanto se refiere a *derechos a adquirir*, es decir, a derechos que deriven de un permiso o autorización que en manera alguna se concederá, como lo dice abierta y claramente el mencionado artículo: «no se *permite*». Pero si el derecho no deriva ni depende de un permiso a conceder, ni de una autorización que la misma ley dice que no se necesita, porque la ley terminantemente declara que los respeta, si se trata de derechos adquiridos que ostensiblemente se reconocen, entonces es notorio que no es de aplicación este artículo sino el anterior, como dice el Sr. Asesor y por las razones que inmediatamente diremos. Por eso ha de tenerse mucho cuidado en las instancias que se dirijan, para no pedir permiso o autorización, como si el derecho derivara de ese permiso; sino que debe exponerse el derecho anteriormente adquirido y que la ley respeta, pidiendo únicamente la práctica de diligencias que la ley interesa para este reconocimiento y expedición del derecho, como la de que se tenga por presentado el escrito y listas acompañadas a los efectos pertinentes. En esto entendemos ha habido una gran equivocación sobre procedimiento, pudiéndose quizás deber a esto el haberse frustrado algunos intentos, no ajustándose a lo que la ley expresa y dan-

dose a entender tratarse de caso distinto no amparado por disposiciones que no se invocaban. Rectificada la petición, hemos visto en algunos casos rectificado también el acuerdo. Este artículo no se opone a derechos adquiridos que se respetan.

b. Por eso, aunque sea doloroso y sensible, dados los términos de la ley en su artículo 3.º tratándose de personas, aun de Religiosas, no amparadas por otra disposición, de Religiosas que no tengan derechos adquiridos al tiempo de la promulgación de la ley, será forzosa atenerse a la disposición de este artículo. Dura lex sed lex, habremos de decir; ley dura, pero es ley y dentro de sus disposiciones no cabe proceder de otra manera.

Pero, por lo mismo que se invocan respetos para la ley, esos mismos respetos a la disposición del artículo 3.º, obligan respetar las disposiciones de otro artículo, como las del 2.º, cuando éste favorece a las Religiosas. No se puede establecer esa diferencia de personas con relación a la ley por su carácter religioso, como lo dice la misma Constitución. Y el artículo 2.º puede amparar y ampara a la Comunidades religiosas, cuando venían poseyendo Cementerios privados, como dice el informe de la Asesoría jurídica.

El artículo 2.º se refiere a los derechos adquiridos, pues terminantemente habla en su párrafo segundo de *revisión de derechos establecidos hasta el momento para las inhumaciones determinando cuáles sean y a qué personas corresponden*, como labor encomendada a los Municipios, a cuyo fin se formarían las listas correspondientes.

El artículo 2.º respeta los cementerios de carácter privado existentes al tiempo de la promulgación de la ley, pues así literalmente lo dice: *serán respetados*, sin apertura de nuevos o ampliación de los actuales.

Ahora bien: las Comunidades Religiosas podían tener, y de hecho tenían no pocas, cementerios de carácter privado, sin que pueda invocarse causa de conveniencia pública ni ninguna otra que a su conservación se oponga. Luego deben respetarse seriamente en obsequio a la misma ley a favor de las personas a quienes afectaban y cumplidas las formalidades procedentes.

No cabe duda de que las Comunidades Religiosas poseían

en muchos casos verdaderos *cementerios*, así de obligada denominación en su sentido físico y literal, directo y natural, en su significación dada por el Diccionario de la lengua y acepción corriente, en su significación vulgar y jurídica. Se trata en casos patentes de lugares seleccionados, segregados o separados de otros usos destinados exclusivamente, habitual y permanentemente, a sepultar y mantener los cadáveres y restos de las Religiosas, lugares acomodados a este fin y adaptados a este destino y acondicionados por las normas y disposiciones legales entonces vigentes para su construcción y que regulaban su establecimiento. Se trata en muchos casos de *cementerios*, así llamados *cementerios* y *cementerios* particulares o privados por multitud de disposiciones legales, Reales Cédulas, Decretos, Sentencias de que podríamos citar un arsenal. ¿Quién podrá, pues, negar que en estos casos se trata de cementerios de carácter privado? Son cementerios y no son comunes ni generales; luego son de carácter privado. Son lugares que no tienen esta finalidad de enterramiento de manera transitoria o accidental y excepcional, sino directa, absoluta, principal y por su propia índole. Luego son cementerios privados, sin que valga decir que se crea otra cosa.

En esta misma diócesis sabemos de alguno que no está situado ni en templo ni en cripta ni siquiera en lugares anejos, sino al extremo de la huerta, con todas las condiciones para cementerio, con su cerca y defensa o tapia, y además apenas separada del Cementerio común más que por una pequeña vía y tapia. Por lo tanto, está también debidamente situado a distancia conveniente, con orientación contraria a los vientos reinantes en la localidad y demás condiciones aun para los Cementerios generales. Nadie, pues, en sano juicio, puede que le podrá negar el carácter de verdadero cementerio de carácter privado. Y en términos parecidos, tendríamos que decir de otros cementerios poseídos por las Religiosas con arreglo a las disposiciones legales vigentes. Se trata de verdaderos *dormitorios*, según la fuerza del primitivo vocablo griego *koite* que deriva la palabra *cementerio*, destinados a plácido sueño hasta que despierten los cuerpos al imperio del Señor, para unirse a las almas gloriosas para participar del premio

al que tanto contribuyeron, según las hermosísimas consideraciones de San Juan Crisóstomo y de otros Santos Padres, que, con sentimiento, no podemos explicar y nos llevarían fuera de nuestro propósito.

Tampoco puede negarse que, al tiempo de la promulgación de la ley citada, las Comunidades estaban en posesión de estos cementerios. La ley reconoce y respeta los cementerios privados existentes al tiempo de la promulgación de la ley. Luego deben respetarse estos cementerios. Basta para ello justificar estas condiciones, alegar ese derecho y posesión, presentar las listas y pedir su respeto para los efectos que la misma ley respeta. Así habrá respetuosa observancia de las disposiciones legales.

c) Todo esto es muy conforme con los principios de justicia natural y con la no retroactividad de las leyes, con la disposición del artículo 3.º del Código Civil, con la equidad natural que *in omnibus, maxime in jure est attendenda* según el consabido principio, y con otras consideraciones y alegaciones que no podemos detenernos a exponer.

d) Así también parece se han explicado otras inhumaciones, como la del Sr. Obispo de Cádiz y otras, no por dispensa de la ley, sino por tratarse de derechos adquiridos que la ley respeta.

e) No basta fijarse solo en un artículo como el 3.º para, sin más ni más, pretenderlo aplicar a todas las Comunidades Religiosas, sin fijarse si tienen o no *Cementerios privados*, sus condiciones, tiempo, etc., como si la ley las excluyera de poder poseer Cementerios en condiciones para su uso, nada más que por ser Comunidades Religiosas. En manera alguna esto es así y, si se respeta la ley, hay que atenderla en todas sus disposiciones.

Es un criterio y principio de interpretación legal, que no debe tomarse una disposición aisladamente, sino toda la ley, y cada una de sus disposiciones en armonía con las demás que comprende. Debe también tenerse en cuenta que *correctio legum est odiosa idemque strictae interpretationis*, la corrección de las leyes es odiosa y por tanto de estricta interpretación, sólo admisible cuando no cabe conciliación, pues, si ésta puede

darse, debe aceptarse según aquel principio, *oportet iura iuris concordare*, es necesario concordar una disposición con otra, y muchas veces, siguiendo aquel otro axioma: *Distingue tempore et concordabis iura*, distingue los tiempos y concordarás los derechos, se obtiene la conciliación o concordia que debe intentarse. Así sucede en el caso presente, con arreglo a estos principios de exegesis legal, según lo hace notar el informe del Sr. Asesor. No hay que admitir contradicción ni corrección odiosa, sino concordia y conciliación manifiesta. Esto se obtiene fácilmente así, según el mismo informe: El artículo 3.º se refiere a lo sucesivo y derechos a adquirir; el 2.º a lo pasado y derechos adquiridos. Así todo se concilia armónicamente, con arreglo a las exigencias de rigurosa exegesis y a la seriedad de la misma ley.

7.º Recibe la dicha mayor confirmación del Reglamento para ejecución de la ley, publicado recientemente con fecha 1.º de abril y a que también alude el informe del Sr. Asesor. En su artículo 2.º se dice: «Los cementerios particulares o panteones de familia independientes que no se hallen enclavados en cementerios generales, tendrán el carácter de cementerios privados y estarán sometidos a las disposiciones de la ley de 30 de enero de 1952 y a las de este Reglamento». Aun las simples sepulturas o panteones de familia independientes no enclavados en cementerios generales, se declara que tendrán carácter de cementerios privados. No cabe distinguir entre sepultura o Panteón de familia y cementerios a que aluden acudían. Aun aquellos, no estando enclavados en Cementerio general, son cementerios privados. Mucho más y con mayor razón habrá de dar este carácter a los cementerios de Religiosas, verdaderos cementerios particulares o, si se quiere, panteones de familia selecta y estrechada por vínculos especiales, panteones no enclavados en Cementerio general. Luego tienen carácter de cementerio privado con aplicación del artículo 2.º de la ley.

En el artículo 25 se respetan los cementerios de extranjeros, disidentes, moros y hebreos para el uso de su destino, con mayor razón, por lo tanto, habrán de respetarse los de las Religiosas, anteriormente existentes, siquiera en las con-

diciones de moros y hebreos, aunque hayan de clausurarse, despues de prestar su servicio señalado, sin que haya ninguna preferencia, pero tambien sin obice ni menoscabo por su condición de Religiosas. Es forzoso respetar los derechos adquiridos.

q: Así también lo han entendido respetables Autores que han escrito con posterioridad a la resolución de nuestros casos. Así lo entiende el M. I. Sr. D. Francisco Blanco Nájera, en su obra «Antijuridicidad de la nueva ley sobre secularización de Cementerios»; así la excelente Revista *Sal Terrae*. Así también otras Revistas y escritores que se han ocupado en el asunto. Así también hemos visto que el M. I. Sr. Vicario General de Palencia en reciente Circular de 25 de abril último lo entiende y recomienda, ya que «este carácter (de cementerios privados) no puede negarse a los Cementerios de Religiosas de clausura», por lo que llama la atención por conducto de los Sres. Capellanes o Curas Párrocos de los pueblos en donde estuvieren enclavados para presentación de datos de las Religiosas a los Ayuntamientos en orden a formación de listas para el reconocimiento de los derechos al enterramiento en sus cementerios privados, advirtiéndole que del acuerdo desfavorable pueden alzarse ante el Gobernador dentro de quince días desde la notificación y contra la resolución del Gobernador interponer recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Provincial dentro de tres meses desde la notificación de la resolución gubernativa.

En esta diócesis a que pertenecen localidades de cuatro provincias, podemos decir que ya en tres se han reconocido en varios casos con todas las formalidades, esperando se extenderá este reconocimiento.

2. — 3.ª. — "Sobre enterramiento de religiosos."

BOE de Toledo, año 89, 1.º de agosto de 1933, núm. 10, págs. 220-225.

En el artículo 3.º de la Ley sobre cementerios, de 30 de enero de 1932, se dice: «En ningún caso será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas ni en las casas religiosas o en los locales anejos a unos y otras.» ¡Sacrificio grandioso para las religiosas de clausura el verse privadas de recibir en día sepultura al lado de las que fueron sus hermanas y el no poder esperar reunidas en el mismo cementerio el día de la gloriosa resurrección! Dura era la Ley, pero había que cumplirla, y de hecho no pocas religiosas descansan ya en cementerios generales, lejos de sus amados conventos.

No han faltado, sin embargo, como luego diremos, quienes defendían que las religiosas que ya lo eran al entrar en vigor la citada Ley, tienen derecho a ser enterradas en los cementerios de sus conventos, y aun en algunos casos se ha conseguido que ese derecho haya sido reconocido por los gobernadores civiles.

Siendo muchos los conventos de religiosas de clausura que hay en nuestra Diócesis, no parecerá inoportuno el dilucidar tan interesante cuestión.

CEMENTERIOS PERMITIDOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN CIVIL ACTUAL

Para que mejor se entienda la cuestión indicaremos cuál es la situación jurídica actual de las varias clases de cementerios:

1.º *Cementerios municipales*. — Serán «comunes a todos los ciudadanos», cualquiera que sea la confesión a que éstos pertenezcan (art. 1.º). Son, por tanto, de carácter general y los únicos que en definitiva han de subsistir.

2.º *Cementerios parroquiales*. — La Ley los considera también como de carácter general. Se autoriza a los Ayuntamientos para expropiarlos y municipalizarlos, que es como decir secularizarlos. En el caso de que los Ayuntamientos prefieran edificar un nuevo cementerio y no incautarse del parroquial, éste *debería* subsistir, por lo menos como cementerio privado. Ni la Ley ni el Reglamento para su aplicación mandan expre-

samente que sea clausurado¹.

3.º *Cementerios particulares que de hecho prestan servicio como generales.* — La Ley prevé este caso y faculta a los Ayuntamientos para incautarse de ellos en caso de necesidad o de suma conveniencia. Si la incautación no se lleva a cabo, y el Ayuntamiento tiene o edifica cementerio propio, subsistirán como cementerios privados, con las limitaciones que se dirán en el número siguiente.

4.º *Los cementerios privados.* — Pueden seguir prestando servicio como hasta ahora, pero sólo para las personas que tenían derecho adquirido antes de la fecha de la Ley citada. Cuando se hayan hecho las inhumaciones de todos los que tenían derecho, serán clausurados. A este efecto, los Ayuntamientos harán un inventario de dichos cementerios y una relación de los derechos anteriores a la fecha de la mencionada Ley.

5.º *Los panteones de familia.* — «Los cementerios particulares o panteones de familia independientes que no se hallen enclavados en cementerios generales, tendrán el carácter de cementerios privados», y por consiguiente se guardará respecto de ellos lo dicho en el número anterior.

6.º *Los cementerios de extranjeros.* — Continuarán prestando servicio como hasta hoy y por tiempo indefinido, ya que sólo en el caso de que no puedan prestar servicio, se prescribe que sean clausurados y se prohíbe la construcción de otros nuevos que tengan el mismo carácter. Es de notar que la continuación de estos cementerios sólo se consiente si están destinados a extranjeros «que en vida profesaron religión distinta de la católica».

7.º *Cementerios de moros y hebreos.* — El citado Reglamento que concede una situación de privilegio a los extranjeros que no sean católicos — agravando aún más el espíritu anticatólico de la Ley —, tampoco se olvidó de los moros y hebreos que existían en las plazas de soberanía de Ceuta y Melilla, cuyos cementerios se permiten hasta que no puedan prestar servicio.

1. Al establecer la Ley las condiciones en que los cementerios privados seguirán prestando servicio y no dice nada de la situación en que quedarán los cementerios parroquiales que hasta ahora han sido generales, parece constituirse que estos habrán de ser clausurados. Sin embargo, también en este punto quizá se ha ido más allá de lo que la Ley pide. En primer lugar, ya hemos dicho que la Ley no dice expresamente que tales cementerios hayan de ser clausurados. Tampoco dice expresamente que sea obligatorio para todos el enterramiento en los cementerios municipales. Obliga, sí, la Ley a todos los Ayuntamientos a tener cementerio propio; pero de estos cementerios municipales la Ley sólo establece que serán comunes a todos los ciudadanos; es decir, que todos los ciudadanos podrán utilizarlos. Obsérvese, además, que la Ley respeta los derechos adquiridos cuando se trata de cementerios particulares. Pero es que no hay también derechos adquiridos respecto de los cementerios parroquiales. Tienen derechos adquiridos en primer lugar los que en esos cementerios poseen sepulchros o sepulturas familiares. Los tienen también los que, al dárseles la Ley pertenecían a la parroquia, pues por el nuevo hecho de ser miembros de esta las leyes reconocen el derecho de ser inhumados en el cementerio parroquial mientras la Iglesia no les priva de este derecho. Y no ha de suponerse, mientras expresamente no se diga, que la Ley de 30 de enero de 1932 les haya quitado de primer de un derecho que las anteriores leyes amparaban.

LOS CEMENTERIOS DE RELIGIOSAS SON CEMENTERIOS PRIVADOS

La enumeración que antecede nos lleva fácilmente a la conclusión de que los cementerios de las religiosas de clausura son cementerios privados en el sentido que la Ley da a esta palabra.

¿Será preciso probar que son verdaderos cementerios? Para ello no invocaremos la definición que da del cementerio el Diccionario de la Academia, que, aunque imperfecta, cuadra bien a la mayor parte de los cementerios de religiosas de clausura. Baste recordar que, en el lenguaje usual, se llama cementerio a todo lugar que de manera permanente y exclusiva está destinado a enterramiento de cadáveres. En multitud de textos legales se da el nombre de cementerios a los lugares que en los conventos de religiosas sirven de manera habitual para enterrar los cadáveres de las que han fallecido. ¿Podrá decirse en serio que estos lugares no son propiamente cementerios, cuando en el mismo Reglamento para la aplicación de la Ley se da el nombre de cementerios a los panteones de familia?

Pues si son verdaderos cementerios, no menos claro es que son cementerios privados. El legislador no se preocupó de puntualizar el sentido de esta denominación. Quizá hubiera podido emplear otra más propia. Desde luego no quiso decir que hayan de considerarse únicamente como cementerios privados los que sean propiedad de personas particulares, pues en el Congreso mismo se declaró que en esta clasificación estaban incluidos los cementerios que son propiedad de Sacramentales, Terceras Ordenes, etc. Son, pues, cementerios privados, según claramente se infiere del contexto de la Ley, todos los que no son de uso general, ya pertenezcan a personas particulares o personas morales, es decir, a Corporaciones, como son las Cofradías, Terceras Ordenes, y, con igual motivo, las Comunidades religiosas.

De hecho no sería difícil tarea citar textos legales en que se llama cementerios privados a los que suelen tener en sus conventos las religiosas de clausura. Y tan claro es esto, que no creemos que haya quien lo ponga en duda.

LA PROHIBICIÓN DE ENTERRAR EN LAS CASAS RELIGIOSAS

Sí, pues, los cementerios de las Religiosas son privados, no queda sino aplicarles lo que prescribe el art. 2.º de la Ley: «Los cementerios de carácter privado hoy existentes, serán respetados; pero no se autorizará la apertura de ningún otro ni la ampliación de los actuales. Promulgada esta Ley, los Municipios intervendrán directamente la administración de tales cementerios, a cuyo efecto dispondrán, en el plazo de un mes, una revisión de derechos establecidos hasta ese momento para las inhumaciones, determinando cuales

no y a qué personas corresponden. Por ningún pretexto se autorizara la inhumación de quienes no figuren en las listas formadas para tal fin, y una vez atendidos estos derechos, se procederá a la *clausura de los cementerios.*"

Pero nos sale al paso el art. 3.º, ya transcrito, en que se establece que en ningún caso será permitida la inhumación en las casas religiosas o lugares anejos. ¿Quiso el legislador restringir en este artículo la extensión del precedente sobre los cementerios privados?

Tal restricción sería injusta y odiosa. Si al respetar los cementerios privados se quiso respetar los derechos adquiridos, tan sagrados son los derechos de las religiosas como los de los demás.

¿Se argüirá, tal vez, que esa restricción se imponía por motivos de higiene? Las leyes que regulan la sanidad de los cementerios existían ya antes del 30 de enero de 1932, y conforme a esas leyes los cementerios de religiosas estaban reconocidos. Y si algunos de ellos no reúnen las debidas condiciones, *méjolos tienen las autoridades para clausurarlos* sin necesidad de esta nueva disposición legal que, intercalada en una ley que quiere regular el carácter confesional de los cementerios, sería innecesaria e inoportuna.

Privar a las religiosas de un derecho que a otros se reconoce sería hacer una excepción odiosa, y las excepciones no deben presuponerse; y menos si para ello es preciso dar a la ley valor retroactivo, como sucedería en este caso, ya que se privaría a las religiosas de un derecho adquirido al amparo de las leyes existentes.

Aunque el texto de la Ley expresase la excepción, la equidad exigiría darle una interpretación benigna. Pero, por fortuna, no es necesario, en este caso, recurrir a tales expedientes, porque el texto de la Ley, *rectamente interpretado*, no ofrece duda.

El ya citado art. 3.º no prohíbe en absoluto las inhumaciones en los templos, criptas, casas religiosas, etc. No priva de los derechos adquiridos a los que legalmente los tienen. Lo que prohíbe es que en adelante se concedan nuevas licencias de inhumaciones en templos y lugares semejantes. Las per-

sonas que, según el art. 2.º, tienen derecho a ser inhumadas en cementerios privados — donde quiera que estén, aunque sea en templos o casas religiosas, pues la Ley no distingue — no necesitan permiso alguno para hacer uso de su derecho. Luego cuando la Ley dice: «No será permitida ninguna inhumación en los templos, etc.», se refiere a inhumaciones que necesiten permiso especial, no a las que por la misma Ley están ya permitidas. Por eso emplea el tiempo futuro.

En materia de tanta importancia se han de medir y pesar bien las palabras. No dice la Ley: «Se exceptúan del caso anterior los cementerios que estén en casas religiosas.» Tampoco dice: «Se prohíben las inhumaciones en los templos, en las casas religiosas», etc. Se emplea, según hemos dicho, el tiempo futuro; se habla de permisos que han de negarse, pero que no podrán ser negados si no son pedidos, y que no se pedirán si no cuando se trate de adquirir un derecho que no esté previamente concedido por la Ley misma.

LA INTERPRETACIÓN OFICIAL

Después de lo dicho no creemos que razonablemente se pueda poner en duda que los entierros de las religiosas han de regirse por el art. 2.º de la ley de cementerios y que el art. 3.º de la misma ley no contiene una restricción del artículo 2.º, sino que se refiere a un caso totalmente distinto.

Esta opinión que hemos expuesto ha sido defendida por insignes autores recientemente en un luminoso y concluyente artículo publicado en el *Boletín Oficial Eclesiástico de Tarazona*. En él, entre otras razones sobrealistimas, se recuerda un hecho que confirma cuanto dejamos dicho. Nos referimos al entierro del Excmo. Sr. D. Marcial López Cordero, Obispo que fué de Cádiz, cuyo cadáver, no obstante estar ya entonces vigente la ley de cementerios, recibió cristiana sepultura en la Catedral de la mencionada ciudad. ¿Es que el Gobierno, que lo autorizó, quebrantó la Ley por él mismo publicada? No, el Gobierno entendió, sin duda, que había un derecho adquirido, y por eso no se opuso a que el cadáver del insigno Prelado fuese enterrado en la Catedral.

Pero en el mencionado artículo se citan otros hechos, quizá más concluyentes. En las normas que en 30 de marzo de 1932 dio el Prelado de Tarazona — hoy Prelado de nuestra Archidiócesis — ya se indicaba que a los cementerios de las Comunidades Religiosas debía aplicarse el artículo 2.º de la Ley, y aconsejaba que se pidiere a la autoridad municipal el reconocimiento de los derechos adquiridos por las religiosas que habían profesado antes de la fecha de la dicha Ley. Así lo hicieron los tres conventos de clausura que hay en Tarazona, y el Ayuntamiento no halló dificultad en reconocer el derecho de las Religiosas. Mas aún: consultado el caso a la autoridad superior, el señor Gobernador de Zaragoza, previo informe del abogado del Estado Asesor del Gobierno civil, confirmó la resolución del Ayuntamiento.

Esta resolución del Gobernador civil de Zaragoza será ciertamente un precedente de gran interés. La solución que a ella se da coordina armónicamente el artículo 2.º y el 3.º de la Ley; en cambio, la solución contraria establecería una antinomia entre los dos dichos artículos que sólo se resolvería admitiendo que el legislador se expresó con notoria impropiedad, y que, por una injusticia evidente, privó a las religiosas de un derecho reconocido a los demás. El más elemental sentido jurídico aconseja interpretar los diversos preceptos de la Ley de manera que entre ellos no haya contradicción, ni de ahí resulte lesión de la justicia.

NORMAS PRACTICAS

En realidad, tanto la ley del 30 de enero de 1932 como el *Reglamento para su aplicación*, de 8 de abril de 1933, imponen a los *Ayuntamientos* la obligación de hacer el inventario de los cementerios privados que existan dentro del término municipal, y la «revisión de los derechos establecidos hasta la fecha de la Ley para las inhumaciones, determinando cuáles sean y a qué personas corresponden». Por consiguiente, las Comunidades Religiosas podrían seguir haciendo uso de sus derechos adquiridos sin esperar la intervención de los

Ayuntamientos. Sin embargo, la ordenanza aconseja pedir a los Ayuntamientos que incluyan los cementerios en el inventario que el citado Reglamento prescribe y que hagan la revisión de derechos a que el mismo Reglamento se refiere.

Adviértase, sin embargo, que no se ha de pedir al Ayuntamiento que conceda el permiso de inhumación — no es esta misión suya —, sino que «revise» los derechos ya existentes.

Parecía natural que la revisión se extendiese a los derechos establecidos hasta la fecha en que la Ley de cementerios entra en vigor; pero el Reglamento dice claramente: «hasta la fecha de la Ley»; por tanto, hasta el 30 de enero de 1933. Así, pues, sólo será reconocido el derecho de ser enterrados en los cementerios de los conventos a las Religiosas que ya hubieran profesado antes de la fecha mencionada. Por consiguiente, sólo los nombres de estas Religiosas deberán figurar en las listas que se envíen a la Alcaldía.

Contra los acuerdos de los Ayuntamientos, se puede acudir en alzada ante el Gobernador, dentro del plazo de quince días, contados desde la fecha de notificación del acuerdo, y contra la resolución del Gobernador procede el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal provincial.

Para no alargar demasiado este artículo prescindimos de insertar aquí los diversos formularios que pueden necesitarse; pero, como del adecuado planteamiento y tramitación del asunto puede depender la favorable resolución del mismo, será muy conveniente que las Comunidades Religiosas que deseen pedir el reconocimiento de su derecho se dirijan al Provisorato, donde se les darán las instrucciones pertinentes.

9.- S. I., "Enterramiento de Religiosas."

BOE de Navarra y Tudela, año 71, 31 de octubre de 1933, núm. 742, págs. 715-722.

El derecho de las Comunidades Religiosas que poseían Cementerios privados para su servicio al tiempo de la promulgación de la Ley de Secularización de Cementerios de 30 de enero 1932, publicada en la «Gaceta» de 6 de febrero siguiente, va siendo reconocido de manera explícita, terminante, pública y solemne, por ilustres Ayuntamientos de notables y cultas ciudades, de importantes capitales, como derecho que debe ser respetado a favor de aquellas Religiosas que formaban parte de esas Comunidades al tiempo de la publicación de la Ley, derecho que no lo han perdido sino que ha de ser reconocido y atendido con arreglo a la Ley y al Reglamento para su aplicación de 8 de abril del corriente año 1933, sin que valgan otras aplicaciones que se han querido hacer de disposiciones que únicamente se referían para lo sucesivo, para los derechos *a adquirir y no a derechos adquiridos* o establecidos hasta aquel momento y que se respetan, y a locales que no sean cementerios privados, que se reconocen, sin consentirse nueva apertura o ampliación, a favor de las personas a quienes aquellos correspondían al tiempo de la promulgación de la ley. Así lo reconocen y declaran esas distinguidas Corporaciones, previo informe luminoso y razonado de competente Asesor Jurídico, al resolver sobre los escritos acompañados de lista y certificación, presentados por las Comunidades Religiosas para la debida aplicación de la Ley y en conformidad con lo dispuesto en la misma y su Reglamento.

A continuación publicamos el informe y resolución del Ayuntamiento de Pamplona sobre las instancias de varias Comunidades, según hemos visto en la prensa periodística. Dice así textualmente:

Ayuntamiento de Pamplona

SESION DEL 27 DE OCTUBRE DE 1933

Luminoso informe del Sr. Secretario de la Corporación sobre la secularización del Cementerios

Escrito de las RR. MM. superiores de los conventos, Agustinas Religiosas de San Pedro, Comunidad de Agustinas Recoletas, Madres Dominicas de la Enseñanza y noviciado de Misioneras Domi-

nicas, interesando la formulación de listas para regular el derecho de cementerio de las comunidades e informe del Sr. Secretario de la Corporación.

El Secretario de la Corporación Sr. Sanz González da lectura al informe emitido en este asunto. Dice así el informe:

«Excmo. Sr.:

El Secretario de la Corporación municipal que suscribe tiene el honor de someter a conocimiento de V. E. el informe emitido en vista de escritos presentados por las RR. MM. superiores de la Comunidad de la Visitación de Santa María (Salesas de Pamplona), Convento de religiosas Agustinas de San Pedro, Convento de Madres Dominicas de la Enseñanza, Convento-Noviciado de Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario y Comunidad de Agustinas Recoletas de Pamplona:

Las Comunidades antes citadas exponen en sus Escritos el derecho de que se creen asistidas para llevar a cabo el enterramiento en los cementerios de cada una de las Comunidades, de conformidad con lo que determina la ley de Secularización de Cementerios, adjuntando a sus instancias relación nominal de las religiosas existentes en dichas comunidades.

La publicación de la ley de Secularización de Cementerios, con fecha 30 de enero de 1932, impuso un nuevo régimen para toda clase de enterramientos, determinando su artículo 1.º que los cementerios municipales serán comunes a todos los ciudadanos, sin diferencias fundadas en motivos confesionales; y estableciendo el artículo 2.º que los cementerios de carácter privado, entonces existentes, serán respetados, sin autorizarse la apertura de ningún otro ni ampliación de los actuales, ordenando a los municipios la intervención directa en tales cementerios, efectuando una revisión de derechos establecidos hasta el momento, para las inhumaciones, determinando cuales sean y a qué personas corresponden.

Por el artículo 3.º establece la ley citada que en ningún caso será permitida la inhumación en los templos o criptas, ni en las casas religiosas, o en locales anejos a unas y otras, salvo lo dispuesto en el artículo 1.º.

Con fecha 8 de abril del corriente año, fué publicado el Reglamento para aplicación de la ley de secularización de Cementerios, a fin de resolver y aclarar cuestiones planteadas por los cuatro artículos de la citada ley, estableciéndose en el capítulo 3.º, artículos 20 y 25 inclusive, cuanto respecta con cementerios privados.

El artículo 3.º de la ley de 30 de enero de 1932 prohíbe, para lo sucesivo, inhumaciones en templos y criptas, así como en casas de religiosas o locales anejos a unos y otras, y es indudable que este precepto se refiere únicamente a aquellos locales que no son por

al cementerio privados, toda vez que, de tener esta concepción, habrían de aplicarse los preceptos contenidos en el artículo 2.º de la ley, que expresamente señala la actuación de los Ayuntamientos con respecto a cementerios privados.

El artículo 2.º de la ley hace referencia a los derechos adquiridos, respetándolos en quien los tuviese a la publicación de la ley, como expresamente señala el párrafo 2.º al decir «revisión de derechos establecidos hasta ese momento para las inhumaciones, determinando cuáles sean y a qué personas corresponden», labor conllada a los municipios.

De la redacción dada al artículo 2.º, resultan respetados los cementerios de carácter privado existentes a la publicación de la ley, porque expresamente dice el artículo 2.º SERÁN RESPETADOS sin apertura de nuevo, etc.

Las comunidades religiosas, al publicarse la ley de Secularización de Cementerios, tenían cementerios de carácter particular, con funcionamiento legal, denominación que en multitud de disposiciones oficiales aparece, entre las que pueden citarse las reales ordenes de 30 de octubre de 1835, 12 de mayo de 1849, 26 de Julio de 1863, 28 de febrero de 1872, 13 de febrero de 1891, R. D. de 16 de abril 1888, etc., etc., sin tener en cuenta lo que el «Códex Juris Canonici» establece en su título XII.

Esto es, que las comunidades recurrentes, al publicarse la ley, tenían cementerios de carácter privado destinados única y exclusivamente a las propias comunidades, reconociéndoles la ley el debido respeto para esos cementerios, limitando exclusivamente su uso a las religiosas que existiesen a la publicación de la ley.

El Reglamento de 8 de abril último establece en su artículo 26: «Los cementerios o panteones de familia independientes que no se hallen enclavados en cementerios generales tendrán el carácter de cementerios privados y estarán sometidos a las disposiciones de la ley de 30 de enero de 1932 y a las del Reglamento».

Esta declaración reconoce el carácter de cementerios privados a los que las comunidades de esta Ciudad poseen, siendo consecuen-

cía de esta declaración el derecho que tienen a que sean en ellos inhumadas las religiosas existentes a la publicación de esta ley.

El artículo 20 del citado Reglamento establece la obligación para los ayuntamientos de proceder a la formación de un inventario de los cementerios privados que existan en el término municipal; especificando el artículo 21 y el 22 del mismo Reglamento la revisión de los derechos de inhumación y formación de listas a que se refiere el párrafo 3.º del artículo 2.º de la ley.

Como consecuencia de lo que antecede, considera el suscribiente que las comunidades recurrentes tienen derecho a que se formen las listas determinadas en el artículo 2.º de la ley y aludidas en el artículo 21 y en el 22 del Reglamento de Secularización de Cementerios, porque los de las Comunidades tienen el carácter de cementerios privados, según queda demostrado en las anteriores alegaciones.

Por tanto, debe el Excmo. Ayuntamiento proceder a la formación de las listas, mediante las oportunas comprobaciones, teniendo en cuenta las relaciones que las superiores han presentado, con la certificación del M. I. Sr. Obispo de la Diócesis, dejando así cumplido cuanto determina la ley y reglamento, y reconociéndose el derecho a sepultura en los cementerios privados únicamente a las religiosas que existieran en las comunidades hasta la fecha de la publicación de la ley.

Como referencia, y para avatar su criterio, el suscribiente se permite indicar a V. E. que por resolución del mes de mayo del corriente año, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de Zaragoza adoptó acuerdo por el que, a virtud de consulta, reconoció el derecho de sepultura en los cementerios privados a las religiosas de Tarazona, habiendo con anterioridad y espontáneamente el Ayuntamiento de Valladolid formado las listas a que alude el artículo 2.º de la ley de 30 de enero de 1922.

Es cuanto el suscribiente tiene el honor de someter a conocimiento de V. E., para que con su ilustrado y superior criterio resuelva lo que estime más justo y procedente, indicando a V. E. que el artículo 23 del Reglamento para la aplicación de la ley de Seculariza-

ción de Cementerios declara que, contra los acuerdos de los ayuntamientos en esta materia, procede el recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Gobernador civil, dentro de quince días, contados desde la fecha del acuerdo; y contra la resolución de esta autoridad cabe el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Provincial.

Pamplona, 23 de octubre de 1923. — *I. Sanz González*.

El señor Arribillaga opina que, a su juicio, después del luminoso informe del señor secretario, no cabe discusión.

El señor Garbayo entiende que, en virtud de lo que dispone la ley, las comunidades religiosas no podrán disponer de cementerios privados.

Los señores Azcárate y Arralza (don P. J.) dicen que es competencia del ayuntamiento este asunto, y opinan que las comunidades de religiosas tienen derecho a disponer de cementerio privado.

Se aprueba el informe.

(De *El Pensamiento Navarro*, del 28 octubre 1833).

EN ZARAGOZA

El Noticiero de Zaragoza, día 28 de septiembre de 1933.
—Número 10.355.

Información municipal

Los cementerios privados

En el plazo de un mes deberán presentar en la Sección de Hacienda, las Comunidades o particulares que posean cementerios de carácter privado, una relación de las personas que tienen derecho a enterramiento en dichos lugares, para cumplir lo que dispone la ley de secularización de cementerios.

Como se vé, hay que añadir este *luminoso*,—así certificado por la prensa—informe del Asesor Jurídico, distinguido Secretario del Ayuntamiento de Pamplona, a los respetables informes jurídicos publicados anteriormente, favorables a las Comunidades Religiosas y que entienden ser clara y evidente la aplicación del artículo 2.º de la ley de 30 enero 1932 y del 20 y siguientes del Reglamento de 8 abril 1933 a los Cementerios privados que venían poseyendo las Comunidades Religiosas.

Según estos informes, es indudable que el artículo 2.º se refiere a Cementerios privados y a derechos adquiridos al tiempo de la promulgación de la ley. Ahora bien; no puede dudarse de que Comunidades Religiosas posean verdaderos Cementerios privados para su servicio al tiempo de la promulgación de la ley de 30 enero 1932. Luego es también indudable que es de aplicación para ellas, en lo que les favorece o perjudica, el artículo 2.º de la dicha ley. Les favorece en lo referente a las Religiosas que formaban parte de la Comunidad al tiempo de la promulgación de la ley, con derechos ya adquiridos en la materia; las perjudica en lo que se deriva para las nuevas Religiosas posteriores, las que no son favorecidas por ese artículo y a las que habrá de aplicarse el artículo 3.º referente a lo sucesivo con los generales de la ley. Por lo tanto, habrá de atenderse a estas disposiciones y, si no se pretenden excepciones privilegiadas o favorables, tampoco deben consentirse excepciones lesivas y restrictivas de los derechos adquiridos que la ley respeta y ampara.

Lo contrario podría estimarse anticonstitucional, como enteramente disconforme con el artículo 27 de la Constitución de la República Española que expresamente dispone que «La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política...» Basta, pues, considerar el asunto ante el carácter general de ciudadanía española para entender aplicable esa disposición como a los demás ciudadanos en todos sus aspectos favorables o adversos.

Tal vez convenga también tener en cuenta lo que se dice en el Decreto que precede como preámbulo firmado por el mismo Exce-

lentísimo Sr. Presidente de la República al Reglamento para la aplicación de la ley de Cementerios, cuando al tratar de cementerios de Extranjeros dice: «Es evidente que, en lo sucesivo, no debe concederse a los extranjeros la facultad de construir nuevos cementerios privados, permitiéndoles lo que no se permite a los nacionales; pero no sería justo tampoco clausurar los que ahora tienen...» Pues esto mismo podemos decir en la materia, por lo que respecta a las Religiosas. Podrá disponerse lo que se estima conveniente para lo sucesivo; pero *no sería justo* clausurar los cementerios que ahora tienen las Religiosas con todos sus derechos adquiridos sobre los mismos y que poseían al tiempo de la promulgación de la ley. Y, si no es justo, no debe así interpretarse la ley que debe ser justa y norma de lo justo, por lo que es evidente que no intenta clausurar estos cementerios y lesionar derechos adquiridos que respeta y reconoce. El texto de la ley, el contexto, las disposiciones complementarias, el paralelismo, los principios de derecho y las normas generales de exégesis legal favorecen e imponen la aplicación indicada a los casos que nos ocupan.

Para ello es necesario practicar las diligencias a que se refiere la ley y los artículos 20 a 23 del Reglamento, requiriendo la intervención de los Ayuntamientos para formación de listas y determinaciones que el Reglamento mismo encomienda a los Ayuntamientos, siendo en esto aún más claro y explícito que la ley que solo hablaba de Municipios.

Sabemos que en muchas ciudades y diócesis de España se practican ya diligencias en conformidad con el Reglamento, para el reconocimiento de los derechos correspondientes con arreglo a la ley que los ampara.

9.- S. f. l. "Se reconoce a las Comunidades Religiosas de Segovia el derecho de inhumación en sus Cementerios."

BOE de Segovia. año 78, 15 de noviembre de 1933, núm 21, págs. 476-496.

Es de nuestros lectores sabido el afán secularizador de la Ley de Cementerios de 30 de Enero del pasado año.

Para conseguir su objetivo de reunir a todos los ciudadanos en un Cementerio común, no repara en desconocer y conculcar la doctrina de la Iglesia articulada en el Código Canónico, ni los derechos de los fieles.

Con todo, el legislador no puede menos de ver los intereses creados, los derechos adquiridos y darlos valencia de modo expreso y terminante en el artículo 2.º, que dice: «Los cementerios de carácter privado, hoy existentes, serán respetados, pero no se autorizará la apertura de ningún otro, ni la ampliación de los actuales». Esto es, ni un nuevo cementerio ni una sepultura más podrán abrirse, ni autorizarse en adelante.

Ni en ningún caso, según el art. 3.º, «se permitirá la inhumación en los templos o en sus criptas, ni en las casas religiosas o en los locales anejos a unos y otras, salvo lo dispuesto en el art. 1.º».

Aparece claramente en el articulado de la Ley el empeño de cuidar todo detalle, de no dejar abierto en esta materia vano alguno ni aun el mínimo de una saetera, y así dispone la intervención directa de los municipios en la administración de los Cementerios privados, los obliga a la revisión de los derechos adquiridos, con determinación bien concreta de las personas que tengan el privilegio de inhumación en los mismos, y una vez atendidos esos derechos impone su clausura. Pero es digno de notarse que dice: «una vez atendidos esos derechos», no antes.

Han de subsistir por consiguiente estos Cementerios privados, según la Ley, mientras haya una sepultura vacía y una persona con derecho a ser en ella inhumada.

En nuestra ciudad, las Comunidades religiosas, con alguna excepción, eran, desde tiempo inmemorial, poseedoras de Cementerios en la legítima acepción de la palabra, en su significación ya vulgar, ya jurídica, y como tales

reconocidos por disposiciones oficiales, Reales Ordenes,⁽¹⁾ Decretos y Sentencias de tribunales en número tan multiplicado que constituye un precioso arsenal.

Tampoco puede negarse que las Comunidades Religiosas segovianas, a la promulgación de la Ley, estaban en posesión de los mismos.

Debían en acatamiento de la Ley, ser respetados estos Cementerios. Era evidente. Para ello había de bastar con justificar las antedichas condiciones, su existencia y su posesión anterior a la promulgación de la Ley, y a los efectos de la misma presentar la relación de las personas que gozaban de ese derecho.

Confirmaba este criterio el Reglamento de 8 de Abril del corriente año para aplicación de la Ley, a que venimos refiriéndonos, en el cap. III, que trata en los art. 20 y 25 inclusive, de «los Cementerios privados» y en el art. 24 extendiendo, aun a los panteones familiares no enclavados en Cementerios generales, el carácter de Cementerios privados.

Con mejores títulos, con toda razón, por tanto, compete esta denominación a los Cementerios de las Comunidades Religiosas.

A mayor abundamiento respeta el art. 25 de dicho Reglamento, para que sirvan a su fin, los cementerios de extranjeros que en vida profesaron distinta religión de la católica, protestantes, hebreos, moros.⁽¹⁾ Al menos, en parejas condiciones a los de los disidentes—ya que no se les dá trato preferente—habían de quedar los de las entidades católicas.

Los Rvdmos. Prelados en sus Pastorales y Circulares, escritores de relieve en Revistas y periódicos, venían sosteniendo el criterio favorable a la inhumación de los Religiosos en sus Cementerios.

Los Ayuntamientos, previo informe de sus Abogados Asesores, resolvían los casos presentados del mismo modo, como en la diócesis de Tarazona, y anteriormente y con espontaneidad el de Valladolid, a los que han seguido los de otras ciudades.

Ni contra este derecho de las Comunidades Religiosas podía alegarse fundadamente el art. 3.º reproducido al principio de estas líneas. No faltaron quienes opinaron aplicable dicho artículo a este caso.

(1) R. O. de 30 de Octubre de 1833, 12 de Mayo de 1849, 26 de Julio de 1863, 28 de Febrero de 1872, 13 de Febrero de 1891. R. D. de 16 de Abril de 1888, etc., etc.

(1) Y en el preámbulo del Reglamento aludido se lee: «Es evidente que, en lo sucesivo, no debe concederse a los extranjeros la facultad de construir nuevos Cementerios privados, permitiéndoles lo que no se permite a los nacionales; pero no sería justo tampoco clausurar los que ahora tienen». Pues lo mismo ha de decirse en lo referente a las Religiosas. No sería justo clausurar los Cementerios que ahora tienen con todos sus derechos adquiridos sobre los mismos.

Si así fuera, el art. 3.º estaría en plena contradicción con el 2.º, y aun el suponerlo, sería injurioso para el legislador—y sobre esto absurdo— que en el art. 2.º afirmaría y respetaría los derechos adquiridos para recrearse sañudamente en negarlos en el siguiente artículo.

Na hay discrepancia, sino armonía en lo dispuesto en ambos artículos, ya que el 3.º dice: «en ningún caso será permitida la inhumación en los templos o en sus criptas ni en las casas religiosas o en los locales anejos a unos y otras, salvo lo dispuesto en el art. 2.º», aunque la Gaceta y la prensa oficial y diaria el reproducirlo de aquella, pongan «salvo lo dispuesto en el art. 1.º», sin duda por un error material de imprenta, que, aun tratándose de un órgano oficial, no ha de extrañar en nada a los profesionales; error por otra parte tan obvio que queda inmediatamente salvado por el buen sentido del lector.

Y de no admitir este error material, había de buscarse la conciliación, según los principios de la exegesis legal, que piden el examen no de un artículo aislado sino de todos los de la Ley, y cada uno de ellos en consonancia con los demás que comprende. En todo caso el art. 3.º se refiere a lo sucesivo y derechos a adquirir, el 2.º a lo pasado y adquiridos.

Así todo queda conciliado. Los poseedores de Cementerios privados no piden permiso, que en ningún caso podría concedérseles ni lo necesitan—la misma Ley lo proclama así—, sino que se limitan a presentar la documentación y solicitar su admisión, para la efectividad del derecho respetado en la Ley. *Dura lex, sed lex*; dentro del art. 3.º, no hay margen a permiso alguno; como, cumpliendo la Ley no cabe negarlo, cuando el caso está incluido en el art. 2.º aunque favorezca a las Comunidades Religiosas, en lo que respecta a la parte de las mismas, perteneciente a la Comunidad al tiempo de la promulgación de la ley, con derechos adquiridos en este punto, perjudicándolas asimismo en lo que mira a las Religiosas que ingresaron posteriormente.

Otra cosa fuera anticonstitucional, como del todo dis-

conforme con el art. 27 de la Constitución, que dice: «La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil, ni política.» Esta disposición es aplicable a las Religiosas, como a los demás ciudadanos en sus aspectos favorables o adversos, mirada aun desde el general punto de mira de la ciudadanía española.

Por haber equivocado el procedimiento o no haber invocado las disposiciones pertinentes, o pedir autorización que la Ley prohíbe otorgar, han sido quizás resueltas en sentido negativo algunas instancias; parece abonar este criterio el que una vez rectificado el procedimiento, se han concedido.

Las Comunidades Religiosas tienen pues derecho a ser inhumadas en sus Cementerios privados, y la Corporación municipal no podrá desconocerle, una vez que lo justifiquen ante la misma, en debida forma.

* * *

A la luz de estas someras indicaciones aparece diáfana y obligada en justicia la resolución del Excmo. Ayuntamiento de Segovia reconociendo el derecho a usar de sus Cementerios privados a las Comunidades Religiosas, que invocaron el art. 2.º de la Ley sobre Cementerios y las del Cap. III del Reglamento para su aplicación.

Desde la promulgación de la Ley, las Comunidades Religiosas anhelaban vivamente se hiciese la revisión de derechos adquiridos; y ante la posibilidad de ser sacado su cadáver al fallecimiento, fuera de la amada clausura, sentían honda pena; al inmolarse a Dios Nuestro Señor en aquella casa de perfección y santidad, lo habían hecho para siempre; inhumadas allí en el panteón o Cementerio de familia, a su muerte, su mismo cadáver, sus restos mortales eran de ello un testimonio perenne y a la vez un vínculo más de intercambio espiritual, para recibir la ayuda de continuas oraciones. Buena prueba de esto es la amargura sentida por las Comunidades, que han visto salir de clausura a las que han fallecido, antes de vindicar su derecho, y que se habían entregado, en vida y en muerte, a la Comunidad.

La enfermedad de una Religiosa del Convento de San Juan de Dios, anciana y en grave peligro de muerte durante el pasado verano, removió los anhelos de pedir el uso de su Cementerio privado. Por la misericordia del Señor la enferma sanó, pero su enfermedad impulsó a hacer presto las diligencias necesarias.

Nuestro Excmo. Prelado, al promulgarse la Ley sobre Cementerios, en luminosa Instrucción Pastoral publicada en su *Boletín Eclesiástico* de 15 de Marzo de 1932, fijó la doctrina de la Iglesia sobre materia de tan alto interés y dió normas prácticas al Clero y fieles para salvar, en cuanto fuere posible, los sacratísimos derechos de la Iglesia; en este particular de los Cementerios privados de las Comunidades Religiosas, ya notaba «que presentaban a las claras las condiciones de carácter privado a los efectos del artículo 2.º».

Al comunicar a su Excia. Rvdma. que se iba a solicitar, conforme a la Ley, de la Autoridad municipal el reconocimiento de Cementerio privado en favor de las Religiosas, orientó, aconsejó y dió su más afectuosa aprobación a la idea. Una vez formado el expediente oportuno, previa conferencia con el señor Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento, D. Pedro Rincón, y el Secretario de la Corporación, D. Juan Velasco, quienes manifestaron su criterio favorable, ya que prometieron obrar en su resolución dentro de la más estricta justicia y con absoluta sumisión a los preceptos de la Ley que se invocaba, quedó presentado al Excmo. Ayuntamiento el 31 del pasado Agosto el expediente del referido convento de San Juan de Dios. Ya se les anticipó que a esta petición seguirían inmediatamente las de las restantes Comunidades Religiosas, poseedoras asimismo de Cementerios propios.

Como por imperativo de la Ley compete a los Municipios la revisión de derechos adquiridos, el señor Alcalde-Presidente, estudiado el asunto, decidió, con plausible acierto, formar el inventario de todos los Cementerios privados existentes en la ciudad y requirió a este fin a todas las Comunidades Religiosas que tuviesen tales Cemen-

terios, si deseaban conservar su derecho, para que en el plazo de un mes presen'tasen los datos oportunos.

Los expedientes llegaron activamente. A su vista y encontrándolos debidamente formados y justificados en todos los extremos exigidos por la Ley, el señor Alcalde-Presidente ordenó se formalizase por la Secretaría el inventario general de los Cementerios privados de dichas Comunidades, como la relación exacta con todos los datos de identidad personal, a los fines solicitados; en la sesión municipal del viernes 27 de Octubre pasado, fueron presentados y aprobados por unanimidad.

Las Comunidades a quienes se reconoció su Cementerio privado son las pertenecientes a los conventos de San Juan de Dios, Agustinas de la Encarnación, Clarisas de Corpus Christi, Purísima Concepción del Licenciado Peralta, Monasterio de San Vicente, Santo Domingo el Real, San Antonio el Real, Carmelitas descalzas, Comunidad de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Terciarias Franciscanas, Carmelitas descalzos y Monasterio del Patal.

La antedicha aprobación fué comunicada por oficio duplicado a cada Comunidad; por su interés reproducimos uno de ellos, el dirigido a la Rvda. Madre Abadesa del Convento de San Juan de Dios y que es del tenor siguiente:

Un sello,
ALCALDIA DE SEGOVIA.
Negociado 1.º, Secretaría.
Número 60.

El Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia en sesión por él mismo celebrada el día 28 del pasado Octubre, acordó por unanimidad aprobar el inventario de los cementerios de carácter privado existentes dentro del término municipal de esta ciudad, entre los que está incluido el de esa Comunidad de su cargo, así como también acordó aprobar la lista de las personas que se expresan en la adjunta relación y que tienen derecho a ser inhumadas en ese cementerio, conforme en un todo a lo preceptuado en la Ley de secularización de cementerios de 30 de Enero de 1932 y Reglamento para su aplicación de 8 de Abril

último, reservándose el Ayuntamiento la facultad que le concede el artículo 2.º de la citada Ley para proceder a la clausura del dicho cementerio por causa de conveniencia pública.

Al propio tiempo he de significar a V. que para el debido cumplimiento de lo anteriormente consignado, la administración del cementerio de esa Comunidad ha de ser intervenida por este Ayuntamiento, a cuyo efecto y con el fin de proceder a su clausura una vez que sean atendidos los derechos de inhumación de las personas que se citan en la relación que se acompaña, deberá dar cuenta por escrito en las oficinas municipales de todo fallecimiento que ocurra en esa Comunidad, con expresión del nombre, apellidos, edad, etc. de la persona fallecida.

Lo que traslado a V. para su conocimiento y efectos, comunicándole que contra este acuerdo puede interponer recurso de alzada ante el Gobernador civil en el término de quince días, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 del reglamento antes mentado.

Segovia 6 de Noviembre de 1953.

Pedro Rincón

Rvda. M. Abadesa del Convento de San Juan de Dios.

* * *

Es de justicia notar—y lo hacemos con satisfacción—la buena disposición, diligencia y delicada corrección, mostradas por la Autoridad municipal en este asunto y su resolución favorable dentro del máximo respeto y sumisión absoluta a la ley.

No se buscaba sino que por la Alcaldía fuesen admitidos los documentos que sirviesen en su día a los efectos de la Ley; ésta, por otra parte, la impone el deber de hacerlo en breve plazo; presentar, pues, a la Corporación un expediente completo con todos los datos legales era facilitar el cumplimiento de la misión encomendada por el legislador, anticiparse los interesados en prestarla una ayuda y colaboración, que se le había de demandar para la efectividad de lo legislado. Muy cierto todo esto, pero en nada hace decrecer el mérito, conchado por la Corporación municipal, que ha actuado dentro de la ley, rectilíneamente, sin prejuicios, ni dilaciones.

Normas de procedimiento

Para que las Comunidades Religiosas de la Diócesis, que aún no hubieren pedido el uso de sus Cementerios privados, tengan un procedimiento práctico, vamos a indicar lo hecho en esta ciudad, con favorable solución.

Solamente las Comunidades que han estado en posesión del Cementerio privado para el enterramiento de Religiosas de las mismas, pueden solicitar el reconocimiento de este derecho y para las Religiosas que lo fueren con anterioridad a la Ley de 30 de Enero de 1932 sobre Cementerios, y sólo para éstas.

Al efecto deben dirigir una instancia al Sr. Alcalde, en estos o parecidos términos:

La infrascripta Priora del..... de.....,
a V. E., respetuosamente expone:

Que, siendo respetados por disposición de la Ley de secularización de Cementerios de 30 de Enero de 1932, art. 2.º, publicada en la «Gaceta de Madrid» de 6 de Febrero siguiente, los Cementerios privados hoy existentes, sin nueva autorización, ni aplicación, atendiéndose los derechos adquiridos anteriormente, a cuyo fin se formarán listos de las personas poseedoras de tal favor, sin permitirse la inhumación de las no comprendidas en las mismas, —ya que el art. 3.º de dicha Ley, referente a derechos a adquirir y para lo sucesivo declara expresa y terminantemente que «no se permitirá»,— esta Comunidad, que desde tiempo inmemorial viene gozando en este convenio de Cementerio de carácter privado o panteón para enterramiento exclusivo de las Religiosas pertenecientes a la misma, desea y pide, amparada en esa disposición, ratificada y detallada en el Reglamento de la Ley sobre Cementerios municipales de 8 de Abril de 1933, publicada en la «Gaceta de Madrid» de doce del mismo mes—como también en haberse reconocido tal favor a Comunidades religiosas de varias poblaciones por los respectivos Ayuntamientos, e interpretado y concordado en el sentido que antes se indica los arts. 2.º y 3.º ya citados por los asesores jurídicos de Gobiernos civiles y municipios—conservar su situación jurídica por lo que respecta a la aplicación de la misma en orden a la conservación de su Cementerio de carácter privado, que esto es el panteón de que goza la

Comunidad, a cuyo efecto y reconocimiento tiene el honor de remitir la lista de Religiosas, que formaban parte de la Comunidad a la promulgación de la citada Ley y continúan en la actualidad dentro de la misma, por asistirlas la disposición mencionada, lista que adjunta con el V.º B.º del Excmo. Prelado diocesano, quien asimismo acredita la posesión del Cementerio privado por parte de esta Comunidad.

Por tanto, al V. E. SUPLICA que teniendo por presentado esta instancia con la lista y certificaciones que acompaña, se sirva admitirlos y tenerlos presentes a los efectos antes indicados, para que en su caso pueda aplicarse la repetida disposición legal con la eficacia procedente.

Lo que espera de la rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

..... a de de 1933.

La Superiora

A la instancia es conveniente acompañar: 1.º una relación de las Religiosas, que pertenecían a la Comunidad con anterioridad al 30 de Enero de 1932, con expresión de su nombre en Religión y en el siglo, naturaleza, años de edad y años que lleva de vida religiosa. Como la instancia, llevará la firma de la Abadesa, Priora o Superiora, sello del Convento y Visto Bueno del Rvdmo. Prelado con el sello del Obispado.

2.º—Certificación de la Secretaría de Cámara y Gobierno con el Visto Bueno del Excmo. Prelado, acreditativa de que la Comunidad está en posesión del Cementerio privado, con anterioridad a la Ley de 30 de Enero de 1932.

3.º—Asimismo certificación justificando la lista de Religiosas; esto es, que las incluídas en la lista, con los nombres y circunstancias que comprende, son actualmente y eran, con anterioridad a la fecha en que se dictó la Ley sobre secularización de Cementerios, Religiosas en la Comunidad de referencia.

En caso de negativa del Ayuntamiento, puede utilizarse el recurso de alzada y el contencioso-administrativo.

Si se ha recibido comunicacion oficial de haberse admitido las listas, podrá servir para utilizarla y aplicarla en su día. Si la admisión de listas existe, pero no se comunicó, convendrá cuando ocurriere la defuncion de la Religiosa incluída en las mismas, notificarla a la Alcaldía por medio de oficio.

En caso de haber comunicado la Alcaldía la admisión de las listas y su aprobacion, como ha ocurrido en nuestra ciudad, aunque podría ser suficiente el aviso al Juzgado municipal con el traslado del acuerdo correspondiente para su debida aplicacion, ha de cumplirse lo que la Autoridad municipal disponga en su oficio, esto es, dar cuenta de las defunciones que ocurran. Esto interesa a la Alcaldía para velar por el cumplimiento estricto de la Ley y su no aplicacion a las personas no incluídas en las listas y para disponer, una vez cubierto el número de las señaladas en la lista, la clausura del Cementerio privado.

Recomendamos se observen esmeradamente todos los extremos, para que puedan aplicarse las disposiciones actuales en sentido favorable.

10.- Cánones del Código canónico acerca de cementerios y enterramientos.

Can. 1205.—Los cadáveres de los fieles deben sepultarse en cementerio que haya sido bendecido según los ritos que se contienen en los libros litúrgicos aprobados.

No se sepulsen los cadáveres en las iglesias, a menos que se trate de los cadáveres de los Obispos residenciales, de los Abades o de los Prelados *nullius*, que deben ser sepultados en su iglesia propia, o del Romano Pontífice, de las personas reales o de los Cardenales de la Santa Iglesia Romana.

Can. 1206.—La Iglesia católica tiene el derecho de poseer cementerios propios. Si en algún país es violado este derecho de la Iglesia, y no hay esperanza de que sea reparada esta violación, procuren los Ordinarios de los lugares que los cementerios propios de las corporaciones civiles sean bendecidos, si los que en ellos suelen enterrarse son católicos en su mayor parte, o, por lo menos, que los católicos tengan en ellos un lugar bendecido y reservado para sí. Y si ni esto puede lograrse bendigase *toties quoties* cada sepultura según los ritos que se prescriben en los libros litúrgicos aprobados.

Can. 1208.—Cada parroquia ha de tener su cementerio; pero el Ordinario del lugar puede disponer que varias parroquias tengan un cementerio común. Los religiosos exentos (y las *religiosas exentas*) pueden tener su cementerio propio, distinto del cementerio común. También otras personas morales (como las *cofradías, asociaciones, corporaciones, etc.*), o familias particulares pueden tener sepulcros propios bendecidos como los cementerios y situados fuera del cementerio común.

Can. 1212.—Si es posible, ha de haber, fuera del cementerio bendecido, otro lugar cerrado y custodiado, en el que sean enterrados aquellos a quienes no se concede sepultura eclesiástica.

Can. 1190.—Las familias o personas particulares pueden erigir en los cementerios capillas destinadas a su propia sepultura, las cuales tendrán el carácter de oratorios privados.

Can. 1194.—En ellas pueden habitualmente celebrarse Misas con permiso del Ordinario.

Can. 1203.—Los cuerpos de los fieles difuntos deben ser sepultados y de ningún modo pueden ser quemados. Si alguno dejara mandado, de cualquiera manera, que su cadáver sea quemado, no es lícito cumplir esta su voluntad; y si la hubiera expresado en algún contrato, en testamento o en cualquier otro acto, sea el que fuere, téngase por no hecha tal manifestación.

Can. 1204.—La sepultura eclesiástica comprende: la conducción del cadáver a la iglesia; las exequias que en la iglesia se celebran *super illud*; y la deposición del mismo en el lugar legítimamente designado para enterramiento de los fieles difuntos.

Can. 1239.—Todos los bautizados tienen derecho a sepultura eclesiástica, a menos que por el derecho sean de ella privados expresamente. Los catecúmenos que *sin culpa* suya mueren sin bautismo deben considerarse como bautizados. No puede darse sepultura eclesiástica a los que mueren sin haber sido bautizados.

Can. 1240.—Han de ser privados de sepultura eclesiástica, si antes de morir no hubieran dado alguna señal de arrepentimiento; 1.º los notorios apóstatas de la fé cristiana o afiliados notoriamente a una secta herética o cismática o a la secta masónica y a otras sociedades parecidas; 2.º los excomulgados o entredichos, después de sentencia condenatoria o declaratoria; 3.º los que deliberadamente se han suicidado; 4.º los muertos en duelo o por causa de herida en él recibida; 5.º los que mandaren que su cuerpo sea quemado; 6.º los demás pecadores públicos y manifestos.

Can. 2339.—Los que osaren mandar u obligar a que se dé sepultura eclesiástica a los infieles, apóstatas de la fe, o herejes, cismáticos y otros excomulgados o entredichos contra lo ordenado en el canon 1240 contraen excomunión *latae sententiae* no reservada; y los que espontáneamente les dan sepultura contraen entredicho *ab ingressu ecclesiae* reservado al Ordinario.

Can. 1241.—Ninguna Misa exequial o de aniversario, al funeral público de cualquiera clase pueden celebrarse por los que fueron privados de sepultura eclesiástica.

Can. 1172.—El cementerio queda violado (*y por consiguiente pierde la bendición*) por cualquiera de los actos siguientes, con tal que sean ciertos, notorios y ejecutados en el cementerio mismo: 1.º por el delito de homicidio; 2.º por grave e injuriosa efusión de sangre; 3.º por haber sido destinado a usos impíos o sórdidos; 4.º por la sepultura de un infiel o de un excomulgado después de sentencia declaratoria o condenatoria.

Can. 1174.—El cementerio que haya sido violado debe reconciliarse cuanto antes según los ritos que se prescriben en los libros litúrgicos aprobados.

Can. 1175.—El cementerio que se violó por la sepultura de un excomulgado o de un infiel no puede ser reconciliado, si antes no se remueve de allí el cadáver, cuando la remoción pueda hacerse sin grave incómodo.

Can. 2329.—El Ordinario puede imponer la pena de entredicho *ab ingressu ecclesiae* y otras proporcionadas a la gravedad del delito a los que violan el cementerio.

Can. 2277.—El entredicho *ab ingressu ecclesiae* lleva consigo: la prohibición de celebrar en la iglesia los oficios divinos o de asistir a ellos y de tener sepultura eclesiástica.

Can. 1242.—Pudiendo hacerse sin grave incómodo debe ser exhumado con licencia del Ordinario y depuesto en lugar profano el cadáver de un excomulgado vitando que fué sepultado en lugar sagrado contra lo estatuido en los cánones.

Can. 1230.—El párroco propio del difunto tiene no sólo el derecho sino también el deber, excepto en el caso grave de necesidad, de levantar el cadáver por sí o por otro, de acompañarlo a la iglesia parroquial y de celebrar en ella las exequias.

Can. 1231.—Terminadas las exequias en la iglesia debe ser sepultado el cadáver en el cementerio según las normas de los libros litúrgicos. Quien hizo las exequias en la iglesia, excepto en el caso grave de necesidad, tiene no solamente el de-

recho sino también el deber de acompañar al cadáver por sí o por otro sacerdote al lugar de la sepultura.

Can. 1232.—El sacerdote que acompaña al cadáver a la iglesia o al lugar de la sepultura puede transitar, aun con estola y cruz alzada, por el territorio de otra parroquia o diócesis, aun sin licencia del párroco o del Ordinario.

Can. 1233.—La familia o los herederos (*del difunto*) pueden invitar para la conducción del cadáver a la iglesia y a la sepultura y para asistir al funeral a los clérigos seculares, a los religiosos y a las asociaciones piadosas que quieran, pero debiendo ser preferidos los clérigos adscritos a la parroquia, sin que pueda el párroco impedirlo, a no ser que haya justa y grave causa aprobada por el Ordinario.

Can. 1214.—Para poder lícitamente exhumar un cadáver en cualquier sitio inhumado en sepultura eclesiástica perpetua se necesita licencia del Ordinario.

Can. 2272.—En un cementerio entredicho pueden sepultarse los cadáveres de los fieles, pero sin ningún rito eclesiástico.

11.- 14 de febrero de 1932. Circular sobre entierros religiosos.

BOE de Toledo, año 88, 16 de febrero de 1932, num. 4, págs. 56-58.

La Ley sobre cementerios y enterramientos recientemente aprobada por las Cortes, dispone que todos los mayores de veinte años que fallecieren sin haber hecho declaración expresa de su voluntad, sean enterrados sin rito alguno religioso.

Hasta ahora, los entierros civiles han sido tan poco frecuentes en España, que son muchos los pueblos donde no se ha conocido un solo caso. La privación de sepultura eclesiástica se consideraba, con razón, pena gravísima, para cuya aplicación solía tropezarse con dificultades por el natural deseo de las familias cristianas de que sus deudos no careciesen, en la sepultura, de las bendiciones y sufragios de la Iglesia.

Parecía, pues, cosa obvia que, aun prescindiendo de la doctrina católica, según la cual todos los que reciben el Sacramento del Bautismo quedan sometidos a la jurisdicción de la Iglesia, se hubiera exigido la declaración expresa de su voluntad no a los que constituyen la casi totalidad de los españoles, sino a los que son la excepción; no a los que con la recepción del Bautismo y con la práctica de la Religión cristiana y particularmente con la recepción de los últimos Sacramentos, manifestaron ya suficientemente su voluntad, sino a los que, habiendo hecho profesión de catolicismo—y la han hecho cuantos recibieron el bautismo—se hayan apartado de la Religión católica, pues con razón podía presuponerse que, mientras no declarasen lo contrario, perseveraban en la fe que un día profesaron solemnemente.

Con la disposición establecida en la nueva Ley, se considera, de hecho, como apóstatas, a los que expresamente no declarasen su voluntad de recibir sepultura eclesiástica, aunque tal vez sea notorio y público que vivieron como hijos fieles de la Iglesia y que en la hora postrera hicieron protesta de su fe recibiendo los Santos Sacramentos y los demás auxilios de nuestra santa Religión.

Y aún podría darse el caso tristísimo de que, a Sacerdotes que consagraron su vida al servicio de la Iglesia, se les haga la ofensa de no considerarlos como católicos y de impedirles que reciban sepultura eclesiástica por no haber cumplido el requisito de manifestar expresamente lo que, con la elocuencia de los hechos, proclamó toda su vida y su ministerio público.

No corresponde esta disposición a la situación religiosa de nuestra Patria: no es, ni aun siquiera democrática, legislar en favor de una pequeñísima minoría imponiendo un gravamen a los que constituyen la casi totalidad de la Nación.

Con ello se ha inferido un agravio, tanto más sensible cuanto menos reclamado por la opinión pública, a la Iglesia católica y a los sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles, ante el cual no podemos menos de expresar nuestro pesar y nuestra protesta.

Por desgracia, ya se ha dado en nuestra Archidiócesis algún caso en que,

a pesar de que el difunto había recibido los últimos Sacramentos y manifestado su deseo de ser enterrado en tierra sagrada, y atestiguarlo así las personas de su familia, fué enterrado sin rito alguno religioso.

Cierto que en este caso hubo, a nuestro juicio, notorio abuso por parte de la autoridad municipal, contra cuya resolución interpondremos el oportuno recurso; pero este caso y otros que pudieran suceder, nos advierten la necesidad de tomar las oportunas precauciones para evitarlo.

En primer lugar, los que hagan testamento, no dejen de consignar en él, de manera clara y terminante, su profesión de fe católica y su voluntad de que su cadáver sea enterrado según los ritos de la Iglesia Católica.

Pero en España son muchos los que, por varias causas, no hacen testamento; por lo cual es urgente que todos —aun aquellos que piensen hacerlo— se apresuren a manifestar su voluntad de recibir sepultura eclesiástica, y esto en forma que no deje lugar a dudas.

A continuación insertamos una fórmula que puede utilizarse. Para mayor seguridad deberá ser suscrita, no sólo por el interesado, sino también por dos testigos.

Aquellos que deseen aún seguridad mayor, pueden hacer que un Notario público legalice su firma. Algún Notario Nos ha ofrecido ya reducir sus honorarios a términos tales que este medio de prueba pueda ser utilizado aun por los más pobres. Mucho nos complacerá que tan generoso y cristiano proceder tenga muchos imitadores.

Un caso particularmente delicado puede ofrecerse cuando se trate de menores de veinte años, cuya voluntad, según la nueva ley, si ellos expresamente no la manifestaron, ha de ser interpretada por sus padres o quienes legalmente hagan sus veces. A la discreción y prudencia de los Párrocos toca determinar si, en casos especiales, procede aconsejar a los dichos menores que hagan por escrito declaración expresa de su voluntad y la forma más conveniente de ejecutarlo.

En todos los casos es muy conveniente que la declaración se haga por duplicado, conservando el interesado un ejemplar y entregando otro al Párroco.

Los que estén acogidos en Establecimientos benéficos o en Hospitales, Sanatorios o Centros análogos, conviene que entreguen una copia al Sacerdote encargado de la asistencia espiritual o a personas de su entera confianza.

No será precaución inútil que todos, pero de una manera especial los que hagan frecuentes viajes o que habitualmente vivan lejos de sus familias, además de emplear las cautelas mencionadas, lleven consigo un ejemplar de su declaración.

Cuiden los Sacerdotes de instruir a los fieles sobre este particular y exhortenlos a que no dejen para la última hora lo que más holgada y seguramente puede hacerse en tiempo oportuno.

Y con el fin de que, en cosa que tanto importa, no haya que lamentar descuidos e imprevisiones, venimos en disponer:

1.º) Esta Nuestra Circular será leída por los Sres. Párrocos, Ecónomos y

encargados de Parroquias en todas las misas que se celebren en sus iglesias el primer domingo después de recibida.

2.º) Los Sacerdotes aconsejarán a todos los fieles y particularmente a los enfermos a quienes asistan, que no dejen de hacer la declaración expresa de su voluntad sobre esta materia.

3.º) En todas las Parroquias se llevará por el Párroco un archivo, rigurosamente secreto, en que se guarden las declaraciones que les entreguen los fieles.

4.º) Todos los Sres. Sacerdotes—sea cual fuere su cargo—entregarán al señor Arcipreste de la demarcación un ejemplar de su declaración. Los señores Arciprestes, en el plazo de un mes, Nos darán cuenta del cumplimiento de esta disposición, y ellos a su vez, entregarán un ejemplar de su declaración al Sacerdote a quien, en caso de su fallecimiento, corresponda hacer su enterramiento.

5.º) Los Superiores de las Religiosas que dependen de nuestra jurisdicción, Nos darán cuenta de que todas las Religiosas súbditas suyas tienen hecha la declaración conveniente, la cual quedará en poder de la Superiora. Y en adelante, al expediente de profesión, se unirá siempre la declaración sobre el enterramiento religioso.

Toledo, 14 de febrero de 1932.

† FELICIANO, Obispo DE ARETUSA
Vicario Capitular.

FÓRMULA DE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD SOBRE ENTERRAMIENTO CATÓLICO

En _____ a _____ de _____ de 19____, yo _____, de _____ años de edad, de _____ natural y vecino de _____, de _____ años de edad, de profesión _____ y con cédula personal de clase _____, número _____, expedida en _____ el día _____ de _____ de 193____, libre y espontáneamente declaro que deseo vivir y morir como hijo de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana; que es mi voluntad expresa que, cuando hubiere terminado mis días, mi cadáver sea acompañado al cementerio por el Clero parroquial con Cruz alzada y enterrado en tierra sagrada, con las ceremonias y ritos de la Iglesia Católica, y que sobre mi sepultura se ponga la santa Cruz.

Y para que así conste, lo firmo con dos testigos, mayores de edad, vecinos de esta población.

(Firma y rúbrica del interesado).

(Firmas y rúbricas de los dos testigos).

NOTAS.—1.º Si el declarante no supiere firmar, en lugar de las palabras *firmo*, se pondrá:

«Y no sabiendo firmar el declarante, lo hacen a su ruego y como testigos presenciales dos vecinos de esta población, mayores de edad».

(Firmas y rúbricas de los dos testigos).

2.º Para mayor facilidad se han impreso unas hojas con la fórmula que precede, las cuales pueden pedirse a la Secretaría de Cámara.

12.- 1 de mayo de 1933. Instrucciones del Excmo. Sr.

Vicario capitular: *Sobre incautación de cementerios y declaración de voluntad de entierro católico.*

RDE de Toledo, año 83, 2 de mayo de 1933, núm. 6, págs. 39-103.

El Reglamento para la aplicación de la Ley de Cementerios ha venido a agravar las condiciones de ésta y a hacer más difícil la situación de la Iglesia.

Tanto por lo que toca a la propiedad de los cementerios como a la práctica de los ritos católicos en los mismos se menoscaban los derechos de la Iglesia y se le ponen trabas que carecen de toda justificación.

No sólo se violan los derechos de la Iglesia mandando a los Ayuntamientos que se incauten de los cementerios, sino que se exige que la Iglesia presente títulos que acrediten sus derechos, cuando la simple posesión, en muchos casos secular, y por añadidura de todos conocida, era razón suficiente para que se hubiera impuesto a los Ayuntamientos la obligación de indemnizar a la Iglesia mientras no pudieran alegar títulos que los excusaran.

Para la indemnización misma se ha establecido un procedimiento que la subordina a los apasionamientos de la política, por cuanto en definitiva se deja al arbitrio de los gobernadores el señalar la cuantía de la indemnización, cuando tan fácil hubiera sido encomendar esta función, tan ajena a la misión de los gobernadores, a Tribunales competentes.

Tampoco se ha buscado en los procedimientos elegidos para hacer constar la última voluntad respecto a los entierros católicos los más fáciles y sencillos. En realidad para quienes están bautizados y no han hecho abjuración de la religión que de manera solemne profesaron en el bautismo, era innecesaria toda manifestación sobre este particular. Pero ya que se haya querido exigir, era innecesario recurrir a medios que, de hecho, claramente se ve que han sido excogitados para anular las declaraciones que muchos tenían formuladas y para introducir complicaciones en un asunto en que convenía dar las máximas facilidades.

Con el fin de que se proceda con la debida uniformidad y de que los derechos de la Iglesia y de los fieles sufran el menor detrimento que sea posible, publicamos a continuación algunas normas que deberán ser puntualmente observadas:

1.º—SOBRE LA INCAUTACIÓN DE CEMENTERIOS

1.º Conocidos el día y hora en que haya de hacerse la incautación—es obligatorio para los Ayuntamientos el comunicarla—el Párroco o el Administrador del Cementerio comparecerá, entregará la llave del Cementerio a la autoridad municipal; pero hará constar que ni su presencia ni la entrega de la llave ni otro cualquier acto ejecutado en cumplimiento de la Ley, sig-

nifican asentimiento a la incautación. Así mismo hará constar el derecho de propiedad de la Iglesia sobre el Cementerio. Es obligación del Secretario del Ayuntamiento el consignar estas manifestaciones en el acta que al efecto habrá de levantarse.

2.ª Los Sres. Párrocos, sin pérdida de tiempo, comunicarán al Provisorato las pruebas que tengan de la propiedad de los respectivos Cementerios y en particular: a) Si tienen título de propiedad, por compra, donación, etc., y si esta propiedad está inscrita en el Registro de la propiedad; b) si por lo menos está inscrita la posesión; c) si el Cementerio ha sido administrado por la Iglesia y por cuánto tiempo; d) si en el pueblo se ha tenido el Cementerio como propio de la Iglesia; e) si ésta ha hecho obras o reparaciones en el mismo; f) si el Ayuntamiento ha contribuido a la edificación, ampliación y sostenimiento del cementerio, o ha tenido alguna intervención en su administración, por ejemplo, percibiendo algún derecho, teniendo en su poder la llave, nombrando o pagando enterrador, etc.; g) enviando, por fin, cuantas noticias se juzguen útiles sobre este particular.

3.ª Asimismo enviarán con urgencia una tasación del cementerio, hecha por dos personas peritas y de reconocida rectitud, a la cual añadirán su opinión particular y una breve noticia de la extensión del cementerio, distancia de la población, edificaciones que en él haya, estado de conservación del mismo, número de sepulturas enajenadas a perpetuidad o cedidas temporalmente, etc.

4.ª Una vez cumplido lo que precede, los Párrocos y encargados de los cementerios esperarán las instrucciones que, según las circunstancias de cada caso, les serán enviadas por el Provisorato.

5.ª Los Sres. Párrocos no entregarán, aunque para ello fueren requeridos, los libros de cuentas y demás documentación relativa a la administración del cementerio; pero, con el fin de evitar molestias a sus feligreses, podrán hacer constar en el acta de incautación, o mediante la oportuna relación, los derechos que éstos tengan adquiridos por compra de sepulturas, pago de derechos de enterramiento, etc.

6.ª Para los casos imprevistos y urgencia, consultarán con los Reverendos Sres. Arciprestes, los cuales comunicarán sus resoluciones a la Curia Diocesana.

2.º—SOBRE DECLARACIÓN DE VOLUNTAD DE ENTIERRO CATÓLICO

1.º «Los sacerdotes, ministros y religiosos profesos de los distintos cultos—dice el Reglamento para la aplicación de la ley de 30 de enero 1932—podrán ser enterrados con arreglo a los ritos de sus respectivas religiones si no hubiesen dispuesto lo contrario». No dice: serán enterrados; sino: «podrán ser enterrados...» ¿Quién ha de resolver en definitiva? ¿La Iglesia? ¿La familia del finado? ¿La autoridad civil? Para evitar posibles dificultades, conviene que las personas a quienes el texto citado se refiere hagan expresa declaración de su voluntad en alguna de las formas que luego se especifican.

2.º El art. 38 del citado Reglamento niega implícitamente valor a las

declaraciones impresas, aunque estén suscritas por el interesado y dos testigos. Cuando en multitud de actos oficiales se generaliza cada día más el uso de impresos, se los excluye en un acto en que parecía natural se diesen las mayores facilidades. Quedan, pues, anuladas la mayor parte de las declaraciones hechas hasta hoy. Ténganlo presente los Sres. Párrocos y no dejen de instruir a sus feligreses acerca de la manera de declarar de su voluntad de ser enterrados según los ritos de la Iglesia católica.

3.º Todas las personas que hayan cumplido los veinte años deberán manifestar su voluntad de alguna de las siguientes maneras:

a) *Haciéndola constar en el Registro que para este fin se llevará en cada Juzgado municipal.* Para ello es preciso que comparezca en el Juzgado el que ha de hacer la declaración, ya sea personalmente, ya por medio de persona que para este efecto tenga poder especial. En la papeleta que se ha de entregar al declarante sólo se hace constar el hecho de la declaración; pero no en qué sentido se hizo. Y, como para pedir certificado del contenido de la declaración será preciso presentar certificación de defunción, resulta que al interesado mismo le es imposible tener en su poder un documento probatorio de su voluntad. Añádase que cuando uno fallezca fuera del lugar donde hizo su declaración, no sólo se originarán molestias y gastos, sino que en muchos casos será imposible tener a tiempo el certificado de la declaración.

b) *Haciendo la declaración en el testamento.* Los sacerdotes deben recomendar a los fieles que no dejen de expresar esta circunstancia. Sin embargo, como son muchas las personas que no hacen testamento, se aconsejará también el empleo de alguno otro de los medios más fáciles previstos en el citado Reglamento.

c) *Puede hacerse la declaración por medio de escritura pública;* pero este medio de prueba será, de hecho, un medio extraordinario.

d) Para todos aquellos que sepan escribir el medio más sencillo será *redactar la declaración de su puño y letra.* En este caso no es preciso ningún otro requisito fuera de la firma del interesado.

e) Puede extender la declaración otra persona distinta del declarante; pero ha de reunir los requisitos siguientes: 1.º La declaración será *manuscrita*, y, por tanto, no tendrá valor si está impresa o escrita a máquina. 2.º Estará firmada por el declarante. 3.º Además ha de estar firmada por el Juez o por el Alcalde del lugar donde se haga. 4.º En lugar del Juez o del Alcalde pueden firmar dos testigos mayores de edad.

Si el declarante no sabe o no puede escribir, firmarán la declaración—que ha de ser manuscrita—el Juez o el Alcalde, o, en lugar de estos, tres testigos mayores de edad.

No podrán ser testigos los parientes del declarante dentro del tercer grado (1).

(1) Es de advertir que según el art. 918 del Código civil, en las líneas se cuentan tantos grados como generaciones, descontando la del progenitor. En la recta se sube únicamente hasta el tronco. Así el hijo diste del padre un grado, los del abuelo y tres del bisabuelo. En la colateral se sube hasta el tronco común y después se baja

4.º De lo dicho se infiere que, para los que sepan escribir, el medio más fácil es que ellos mismos escriban y firmen su declaración sin necesidad de testigos.

Para los que no sepan escribir, o faltaran por causas de buena voluntad — el Párroco mismo, el sacerdote, los miembros de asociaciones piadosas — que escriban la declaración, ni tres testigos que reúnan las condiciones antes expresadas.

5.º En algunos casos no será inútil precaución que de la declaración se hagan dos ejemplares, y que uno de ellos se entregue al Párroco, quien lo archivará en lugar seguro.

6.º Respecto de los menores de veinte años, la discreción de los Párrocos y confesores resolverá si ha de aconsejarles que hagan declaración de su voluntad. En caso de no haberla hecho, resolverán sus padres o representantes legales, o la familia, según se establece en el art. 11 del citado Reglamento.

7.º Para mayor facilidad las declaraciones se redactarán en forma breve, no poniendo más que los datos esenciales, a saber: el lugar y la fecha; el nombre, los dos apellidos, edad y estado del declarante, y la declaración del carácter católico del entierro (1).

basta la persona con quien se hace la computación. Por esto el hermano dista dos grados del hermano; tres el tío, hermano de su padre o madre; cuatro del primo hermano en adelante.» Por tanto no pueden ser testigos los hermanos, ni los tíos carnales; pero sí los primos hermanos, etc.

(1) He aquí una fórmula que puede usarse:

En (lugar), a de de (día, mes y año). N. N. N. (nombre y apellidos), de años de edad, soltero (o casado o viudo), manifiesta que es su voluntad que, cuando su cadáver haya de recibir sepultura, se guarden en su entierro los ritos de la Iglesia Católica.

(Firma del declarante y de los testigos, si los hubiere).